BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

AÑO CCCXXXIV • MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 1994 • SUPLEMENTO DEL NUMERO 309

ESTE SUPLEMENTO CONSTA DE SEIS FASCICULOS

CORTES GENERALES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994, del Presidente del Congreso de los Diputados y del Presidente del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas correspondiente a la Cuenta General del Estado de 1990, así como los acuerdos anejos.

ANEXOS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

INFORME ANUAL SOBRE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO EN 1990

INDICE

INTRODUCCIÓN .

OBSERVACIONES GENERALES

SECTOR PÚBLICO ESTATAL

I. CUENTA GENERAL DEL ESTADO: REGULARIDAD FINANCIERA Y CONTABLE (FUNDAMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN DEFINITIVA).
- I.1. Aspecto generales
- I.2 Cuenta de la Administración General del Estado
- I.3 Cuentas de los Organismos Autónomos Administrativos
- I.4 Cuentas de los Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros
- I.5 Apartado adicional. Cuentas no incluidas en estados agregados

II. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
- II.1. Análisis de las modificaciones de crédito
- II.2. Análisis de la ejecución del presupuesto de gastos
- II.3. Análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos
- II.4. Presupuesto funcional
- II.5. Análisis especial del reflejo presupuestario de las relaciones financieras España - Comunidades Europeas

III. FISCALIZACIONES ESPECÍFICAS
- III.1. Fiscalización de la gestión económico-financiera del Instituto Nacional de Estadística
- III.2. Examen de los procedimientos y contabilidad de los ingresos procedentes de la venta de bienes e inversiones reales del Estado, alquileres y concesiones administrativas
- III.3. Análisis del subprograma 715.A4 relativo al control y actividades en el marco del régimen de ayudas de la CEE al aceite de oliva
- III.4. Fiscalización de los préstamos de la Dirección General para la vivienda y arquitectura
- III.5. Análisis de los sistemas de seguimiento de los indicadores de eficacia en la Dirección General de Correos y Telégrafos
- III.6. Análisis del programa 724B "Apoyo a la pequeña y mediana empresa"
- III.7. Análisis especial sobre el control y seguimiento de las subvenciones concedidas al sector privado
- III.8. Fiscalización de subvenciones otorgadas por los Ministerios de Sanidad y Consumo, Trabajo y Seguridad Social, Cultura, Justicia, Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores, con cargo a créditos consignados en los artículos 47, 48, 77 y 78 del presupuesto, con especial referencia a las financiadas con la asignación tributaria del IRPF
- III.9. Fiscalización de los gastos derivados de la contratación militar en el extranjero y de la gestión de los Fondos Públicos situados en el exterior para tal fin

IV. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES ESTATALES Y ENTES DE DERECHO PÚBLICO .
- IV.1. Sociedades Estatales no financieras
- IV.2. Sociedades Estatales financieras
- IV.3. Entes de Derecho Público

V. LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
- V.1. Consideraciones previas
- V.2. Contratos de obras
- V.3. Contratos de suministro
- V.4. Contratos de asistencia técnica

VI. UNIVERSIDADES QUE PERMANECEN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ESTADO .
- VI.1. Introducción
- VI.2. Resultados de la fiscalización

SEGURIDAD SOCIAL

I. CALIFICACIÓN GENERAL DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1990 . . . . . .

II. EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- II.1. Aspectos generales
- II.2. Balance de situación
- II.3. Resultados del ejercicio
- II.4. Cuenta de liquidación del presupuesto
- II.5. Mutuas de accidnetes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social
- II.6. Expedientes de depuración tramitados por la comisión para el estudio de las cuentas y balances de la Seguridad Social

III. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- III.1. Consideraciones generales
- III.2. Contratos de obras
- III.3. Contratos de servicios
- III.4. Contratos de suministros
- III.5. Las Entidades del sistema de la Seguridad Social y la contratación administrativa

SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

I. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

II. CORPORACIONES LOCALES

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

MEMORIA DE LAS ACTUACIONES JURISDICCIONALES

ANEXOS

INTRODUCCION

PRESENTACION DEL INFORME

El presente Informe sobre las cuentas y el resultado de la fiscalización de la gestión del Sector Público en el ejercicio 1990, aprobado por el Pleno de este Tribunal con fecha 21 de diciembre de 1993, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 136.2 de la Constitución, 13 de la Ley Orgánica 2/82 de 12 de mayo y 28 de la Ley 7/88 de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado se continúa emitiendo en documento independiente , según la interpretación dada a los arts. 10 de la Ley Orgánica y 33 de la Ley de Funcionamiento; no obstante, en el presente Informe se encuentran los resultados de su examen y comprobación, que constituyen el soporte de aquélla.

El Informe integra la totalidad de la actuación fiscalizadora del Tribunal, con independencia de los Informes elaborados a solicitud de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, así como los que proceden del mandato de normas legales específicas -fundamentalmente los que se derivan de las Leyes Orgánicas del Régimen Electoral General y de Financiación de Partidos Políticos-.

Para el ejercicio económico de 1990, el Informe se estructura en cinco partes, cuadros anexos y las alegaciones efectuadas por el Gobierno de la Nación, oídos los Centros gestores.

La primera parte -a la que se denomina Sector Público Estatal- recoge el resultado del análisis de las cuentas y de la gestión de la Administración del Estado, de los Organismos Autónomos, de las Sociedades Estatales y de los Entes de Derecho Público, complentándose con un análisis de las cuentas de aquellas Universidades que se encuentran encuadradas en la órbita de la Administración central del Estado.

La segunda parte del Informe, incluye de forma diferenciada ante sus específicas circunstancias, -y a pesar de su indudable pertenencia al Sector Público Estatal- la fiscalización de la Seguridad Social. Se analiza la gestión por entidades, así como las cuentas del sistema, efectuándose como en años anteriores, la calificación general de aquéllas.

La tercera parte, Sector Público Territorial, presentada con una estructura semejante a la de Informes anteriores, agrupa la fiscalización de las cuentas y de la gestión económica de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

En la cuarta parte del Informe, se presentan -como ya se hizo en los ejercicios económicos anteriores- los resultados de la fiscalización de las dotaciones anejas al Fondo de Compensación Interterritorial, tanto de los gestionados por la Administración Central, como de los que lo fueron por las diferentes Comunidades Autónomas.

La quinta parte del Informe, da cumplimiento al mandato del nº 3 del art. 13 de la Ley Orgánica del Tribunal, y resume las actuaciones jurisdiccionales que han tenido lugar en el ejercicio, así como la cuantificación de los reintegros obtenidos para el Tesoro como consecuencia de los procedimientos conclusos.

La descripción del marco jurídico presupuestario del ejercicio, junto con las observaciones generales -que se exponen tras esta introducción- completan el Informe anual de este ejercicio.

Las alegaciones que se unen a este Informe están referidas al Sector Público Estatal, -en las que se incluyen las relativas al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado- a la Seguridad Social, y a la parte del Fondo de Compensación Interterritorial gestionado por la Administración del Estado. Se unen, asimismo, las alegaciones de las Universidades que permanecen en el ámbito de competencia del Estado y las relativas al Fondo de Compensación Interterritorial gestionado por las Comunidades Autónomas. En relación con las alegaciones, para que quede clara en cada caso la posición final de este Tribunal, se efectúan las siguientes observaciones:

a) No se aceptan como suficientemente justificativas de los hechos o prácticas puestos de manifiesto en el Informe las siguientes alegaciones:

1) Cuando la omisión del registro contable de obligaciones o derechos firmes se fundamentan en insuficiencias crediticias que pudieron ser evitadas por la Administración o en problemas derivados del sistema de información que, en su momento, pudieron ser resueltos.

2) Cuando en observaciones relativas al tratamiento inconsistente de determinadas operaciones que implican a dos o más entidades, se justifica la actuación de una de ellas y no la del conjunto.

3) Cuando se apela a la existencia de disposiciones administrativas que no satisfacen los principios contables que deben informar la contabilidad pública.

b) Se realizan los oportunos comentarios cuando en las alegaciones se vierten determinados juicios u opiniones que este Tribunal no comparte.

c) En los casos en que las alegaciones se aceptan en todo o en parte, se modifica el texto originario, indicándose esta circunstancia mediante la inclusión de un asterisco (*) al final de cada párrafo afectado.

d) Por último, no se hace referencia alguna a dichas alegaciones cuando confirman o al menos no desvirtúan, de forma manifiesta, el contenido del Informe aunque contengan explicaciones circunstanciales sobre los hechos puestos de manifiesto por este Tribunal.

Los volúmenes que se presentan a las Cortes Generales, con independencia de la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado, y que configuran el Informe Anual de 1990 -entendido en sentido amplio-, son:

a) Informe Anual

b) Volúmenes adicionales

- Cuentas de la Seguridad Social
- Cuentas de las Sociedades Estatales Financieras
- Cuentas de las Sociedades Estatales no Financieras y Entes de Derecho Público
- Cuentas del Sector Público Territorial: Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales

c) Informes especiales, que incluyen los relativos al Ayuntamiento de Zaragoza (ejercicios 1988, 1989 y 1990) y al Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas) (ejercicios 1988 y 1989).

d) Informes sobre el Fondo de Compensación Interterritorial (ejercicio 1990) de las Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, elaborados por este Tribunal, e Informes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Galicia y Valenciana elaborados por sus respectivos Órganos de Control Externo.

DESCRIPCIÓN DEL MARCO JURÍDICO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

1. Disposiciones generales

El marco jurídico general que regula la materia presupuestaria en el ejercicio 1990, al igual que en años anteriores, se encuentra, con independencia de las previsiones fundamentales establecidas en el art. 134 de la Constitución, en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (en adelante TRLGP) por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria; dicho Texto -ya modificado sustancialmente por la Ley 37/88 de Presupuestos Generales del Estado para 1989-, va a experimentar en 1990 nuevas variaciones, lo que origina -como repetidamente ha puesto de manifiesto este Tribunal- una distorsión de la significación ordenadora que el Texto Presupuestario básico debe poseer.

Durante el ejercicio económico de 1990, se mantuvieron vigentes las órdenes de 31 de marzo de 1986 que aprobaron las Instrucciones de Contabilidad de los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos del Estado y de los Organismos Autónomos. Asimismo, se mantuvo vigente la Orden de 21 de enero de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social.

Conviene citar finalmente, la Orden de 13 de febrero de 1989, por la que se dictaron las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1990.

2. Normas generales que condicionan la ejecución del ejercicio 1990 desde la óptica presupuestaria y contable

a) *Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria*

La imposibilidad de presentar en plazo a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley por el que se habrían aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 1990, hizo necesaria la aplicación de la previsión contenida en los arts. 134.4 de la Constitución y 56 del TRLGP. Como consecuencia de lo establecido en el número 2 del último de los artículos citados, la situación de prórroga automática contemplada en los mismos, no afectaba a los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas que terminaran en el ejercicio cuyos presupuestos debían prorrogarse.

Por otro lado, la necesidad de que determinadas normas, al carecer de vigencia indefinida y no quedar automáticamente prorrogadas por aplicación de la previsión constitucional, mantuvieran su eficacia a partir de 1 de enero de 1990, originó la promulgación del citado Decreto-Ley, mecanismo utilizado al entenderse que se cumplían las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que prevé el art. 86 de la Constitución.

Dicho Decreto-Ley contempló:

- El incremento de retribuciones del sector público y de pensiones públicas, al no parecer oportuno demorar el mismo, en la medida en que para un amplio sector de la población su principal fuente de ingresos depende de dichas retribuciones y pensiones.

- Las autorizaciones pertinentes para emitir Deuda Pública de manera que quedara garantizada la financiación de los créditos prorrogados.

- La prórroga para 1990 de determinados preceptos de la Ley 20/1989, de 28 de julio, que adaptaron la normativa del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, a la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989.

- Las disposiciones que ajustan anualmente el marco individual de los distintos tributos a las circunstancias sociales y económicas concurrentes con la política fiscal.

- La adaptación desde 1 de enero de 1990 de la normativa sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas, como

consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de Sociedades.

b) *Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria (procedente del Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre)*

La conveniencia de consolidar el Real Decreto-Ley 7/1989, caracterizado por un cierto rasgo de provisionalidad, originó la tramitación de un Proyecto de Ley en forma simultánea a la de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, en el que se recogieran aquellas disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley citado que fuera necesario que conservaran su vigencia y no resultaran afectadas por la finalización del período de prórroga presupuestaria.

Dicha Ley contempló:

- La regulación de las operaciones de tesorería con las Comunidades Europeas.
- Las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
- Determinadas disposiciones financieras,como la regulación de los avales públicos y de las relaciones con el Crédito Oficial.
- La totalidad de las normas tributarias, toda vez que las mismas no se incluyeron en la Ley de Presupuestos para 1990.
- La totalidad de las disposiciones adicionales del Real Decreto-Ley 7/1989 que tenían vocación de permanencia.
- La derogación -por razones de técnica legislativa- de la integridad del Decreto-Ley 7/1989.

c) *Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990*

Como se ha indicado anteriormente, la imposibilidad de aprobar la Ley de Presupuestos antes de 1 de enero de 1990, originó la entrada en juego de las previsiones del art. 134.4 de la Constitución, así como del 56 del TRLGP; asimismo, el Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, autorizó determinadas medidas de carácter financiero, tributario y presupuestario, encaminadas a evitar situaciones de vacío legal que pudieran incidir negativamente en el orden social económico o jurídico preexistente.

La Ley 4/1990 pone fin a la situación de prórroga antes descrita; la misma se estructura en ocho títulos, comprensivos de 88 artículos; se compone también de 28 disposiciones adicionales, 7 transitorias, 12 finales y 4 derogatorias.

A la misma se acompañan 7 anexos, relativos a la enumeración de los programas de gasto, a la determinación de los créditos que podrían ser considerados como ampliables, a la fijación de las operaciones de crédito autorizadas a Organismos Autónomos y Entes Públicos, a la asunción por el Estado de deuda del Instituto Nacional de Industria (INI) con efectos de 1 de enero de 1990, a la cuantificación y desglose de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de Centros concertados, a la determinación de los costes de personal de las Universidades de competencia del Estado, y a la enumeración de los programas y proyectos de inversión respecto a los que pueden adquirirse compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61.4 del TRLGP.

Su articulado regula materias tradicionalmente tratadas en leyes de presupuestos anteriores, con la siguiente distribución: Título I "De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones"; Título II "De la gestión presupuestaria"; Título III "De los Gastos de Personal Activo"; Título IV "De las pensiones públicas"; Título V "De las operaciones financieras; Título VI "Normas tributarias"; Título VII "De los Entes Territoriales" y Título VIII "Disposiciones sobre la Organización y los sistemas de gestión económico-financiera del Sector Público".

La Ley 4/1990, sin perjuicio del mandato constitucional de regulación de la totalidad de gastos e ingresos del Sector Público Estatal, está informada por los siguientes objetivos:

- Limitar la potestad de reconocimiento de obligaciones no financieras, excluidas las derivadas de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y de generaciones de crédito financiados con ingresos previos.
- Facilitar un mayor conocimiento de los ingresos públicos al incluir la ordenación sistemática de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado.
- Culminar la equiparación en cuantías entre las pensiones de los Regímenes de Clases Pasivas concedidas a partir de 1 de enero de 1985 y las de la Seguridad Social.
- Limitar el denominado recurso del Tesoro del Banco de España en sentido estricto, haciendo de él un puro mecanismo de financiación intraanual, en aras de conseguir las recomendaciones de los órganos pertinentes de la Comunidad Económica Europea.
- Regular determinados aspectos de la gestión recaudatoria, al haber sido ajustado el sistema impositivo vigente por el Real Decreto-Ley 7/1989.
- Ajustar la regulación del Fondo de Compensación Interterritorial al nuevo sistema acordado con las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Después de las modificaciones del TRLGP efectuadas por la Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, la Ley del presente ejercicio ha vuelto a modificar el mismo, esencialmente en lo que se refiere al art. 34 en cuanto a las garantías de las deudas con la Hacienda Pública y a los arts. 149 y 150, referidos a la gestión presupuestaria de la Seguridad Social, así como afectado de manera exclusiva para 1990 a los arts. 59 a 73 del repetido TRLGP en lo que se refiere a las normas establecidas para las modificaciones de los créditos presupuestarios.

Además de las modificaciones del TRLGP, la Ley de Presupuestos, en diferentes artículos, ha modificado:

- La Ley de Contratos del Estado, en su texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril, modificado por la Ley 5/1973, de 17 de marzo, y por el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, al objeto de adecuarla a la normativa comunitaria y a las exigencias actuales de la contratación pública.
- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en lo que se refiere al reingreso al servicio activo de los funcionarios al servicio de la Administración del Estado.
- El Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se promulgó el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, en cuanto a muy diferentes cuestiones relativas al mismo.
- La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en cuanto a muy diferentes cuestiones relativas a la misma.
- La Ley 26/1983, de 26 de diciembre, de Coeficientes de Caja de los intermediarios financieros, en lo referido a la señalación del límite máximo de los mismos.
- El Decreto Ley 18/1962, de 7 de junio, de nacionalización del Banco de España, en cuanto a la retirada de billetes del mismo.
- La Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, en lo que se refiere a la creación del Número de Identificación Fiscal, y a la adjudicación a la Hacienda Pública de bienes embargados.
- La Ley del Patrimonio del Estado, de 15 de abril de 1964, en cuanto a muy diferentes cuestiones relativas a la misma.
- La Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958, en lo que se refiere a los contratos de adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles de los Organismos Autónomos.
- La Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el Régimen del Seguro de Crédito a la Exportación, en cuanto a la asunción de la cobertura de riesgos por parte del Estado.
- La Ley 40/1980, de 5 de julio, de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social, en cuanto a la gestión recaudatoria de determinados ingresos de la misma.
- La Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, en cuanto a los requisitos para el ejercicio de la actividad que dicha Ley regula.

La Ley 4/1990 ha sido desarrollada, entre otras, por las siguientes disposiciones:

- Resolución de 5 de septiembre del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el Plan de

Disposición de Fondos del Tesoro Público para 1990, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 77 del TRLGP.

- Orden de 29 de octubre de 1990, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento para la apertura del presupuesto de gastos definitivo correspondiente a 1990, en los diferentes Centros Gestores.

- Orden de 10 de octubre de 1990, por la que regulan las operaciones de cierre del ejercicio, en relación con los gastos públicos.

3. Normas que afectan a la ejecución de los presupuestos de los distintos subsectores del sector público

a) *Administración del Estado*

- Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y se aprueba la Instrucción provisional de Contabilidad del Inmovilizado no financiero de la Administración del Estado.

- Orden de 11 de enero de 1990, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que regulan las normas de concesión de subvenciones a Centrales Sindicales en 1990.

- Orden de 1 de febrero de 1990, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se regulan los flujos financieros de la CEE con la Administración Pública española, así como el sistema de anticipos relativo a la financiación de las operaciones del FEOGA-Garantía y del Fondo Social Europeo.

- Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la devolución de los ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

- Finalmente, y aún sin vigencia en el ejercicio, el Real Decreto-Ley 4/1990, de 28 de septiembre, sobre modificación parcial del Impuesto de Actividades Económicas.

b) *Seguridad Social*

- Orden de 31 de julio de 1990, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los criterios de gestión, modificación y seguimiento de los créditos del Presupuesto del Instituto Nacional de la Salud.

- Orden de 13 de diciembre de 1990, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 1990 y la documentación contable a rendir por los Agentes del sistema.

c) *Comunidades Autónomas*

- Ley 29/1990, de 26 de diciembre, por la que se regula el Fondo de Compensación Interterritorial.

  Dicha Ley, que deroga la hasta entonces vigente de 31 de marzo de 1984, cumple la función de revisión de la anterior basado en los motivos siguientes:

  . La doble finalidad del Fondo que persistió tras la reforma del Sistema de Financiación Básica.

  . La desviación relativa de sus recursos hacia los territorios más desarrollados.

  . El cumplimiento del plazo establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) por la revisión de la ponderación de los criterios de reparto de este mecanismo financiero.

  . La conveniencia de que el Estado adopte, tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea, una política regional coherente y armónica con la comunitaria.

  Coherentemente con todo lo expuesto la presente Ley está informada por los siguientes objetivos:

  . Regular el Fondo de Compensación Interterritorial en todos sus aspectos esenciales, sin limitarse a revisar la ponderación de los criterios de distribución del mismo.

  . Definir las variables de reparto y su ponderación, observando lo establecido en el art. 16 de la LOFCA y adoptando un sistema próximo al establecido por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  . Determinar la cuantía global del Fondo en función de la inversión pública incluida en los Presupuestos Generales del Estado, ponderada por la población relativa del conjunto de Comunidades Autónomas beneficiadas sobre la Estatal, y por el cociente entre la renta por habitante media nacional y la renta por habitante de las Comunidades Autónomas partícipes -únicamente las de menor desarrollo económico dentro del Estado-.

  . Eliminar la interpretación restrictiva de la antigua Ley del Fondo respecto a la expresión "Gastos de inversión" utiliza en la LOFCA, permitiendo la financiación tanto de inversiones reales como de transferencias de capital.

- Asimismo, la propia Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio, dictó normas estatales que afectaron a la ejecución de los presupuestos de las Comunidades Autónomas, encuadrándolas fundamentalmente en el capítulo II, del Título VII de la citada Ley que reguló las siguientes materias:

  . El porcentaje de participación de las Comunidades Autónomas en los Ingresos del Estado durante el quinquenio 1987-1991, aplicables a partir del 1 de enero de 1990.

  . La participación de las Comunidades Autónomas en los Ingresos del Estado.

  . La liquidación definitiva de la participación de las Comunidades Autónomas en los Ingresos del Estado para 1989.

  . Las transferencias a las Comunidades Autónomas correspondientes al coste de nuevos servicios traspasados.

  . La regulación provisional del Fondo de Compensación Interterritorial, hasta la aprobación de la nueva Ley citada en el epígrafe anterior.

- Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Por lo que se refiere a la legislación autonómica es pertinente citar, agrupados por Comunidades los siguientes textos legales:

Asturias

Ley 2/1990, de 19 de diciembre, reguladora de las Tasas del Principado de Asturias.

Canarias

Ley 5/1990, de 22 de febrero, sobre Régimen Jurídico de Tasas y Precios Públicos.

Castilla-La Mancha

Ley 3/1990, de 18 de mayo, sobre Régimen de Tasas y Precios Públicos.

Islas Baleares

Ley 11/1990, de 17 de octubre, sobre Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Madrid

Ley 9/1990, de 8 de noviembre, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Murcia

Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia.

País Vasco

Ley 3/1990, de 31 de mayo, de Regulación de Tasas y Precios Públicos.

Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco, en lo que se refiere al control de los gastos electorales.

d) *Corporaciones Locales*

Las principales normas en el subsector referido se encuentran en el capítulo I del título VII de la Ley de

Presupuestos Generales del Estado del ejercicio, que regula entre otras materias:

- El porcentaje de participación de los municipios en los tributos del Estado para el quinquenio 1989-1993.
- La participación general de los municipios en los tributos del Estado.
- El porcentaje de participación de las Provincias, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no insulares e Islas en los tributos del Estado.
- La regulación de las entregas a cuenta y liquidaciones definitivas de las participaciones de las Entidades Locales en los tributos del Estado del ejercicio.
- La regulación de la subvención estatal a las Entidades Locales por servicios de transporte colectivo urbano.
- La regulación de otras subvenciones a las Entidades Locales diferentes a las señaladas en el punto anterior.
- La regulación de la compensación de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, como consecuencia de inundaciones y otras catástrofes.
- La creación de una dotación específica de crédito destinada a la concesión de préstamos a favor de las Corporaciones Locales por la supresión de los recursos tributarios definidos en la Ley 24/1983, de 21 de diciembre.
- La regulación de la asunción por los Ayuntamientos de la recaudación de determinados tributos.

Cabe añadir también el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

En materia tributaria de ámbito local, es de mencionar la Ley 5/1990, de 29 de junio, que convalidó parcialmente el Real Decreto Legislativo 7/1989, de 29 de diciembre, que establece determinadas modificaciones en los impuestos locales, aplicables en el año 1990 y siguientes.

Aunque todavía no fueron de aplicación durante el año de 1990, deben citarse las dos Ordenes Ministeriales de 17 de julio de 1990 por las que se aprobaron las Instrucciones de Contabilidad de las Entidades Locales (para Corporaciones mayores y menores de 5.000 habitantes, respectivamente), ya que establecen la estructura del nuevo sistema contable que deberá regir para las mismas a partir del año 1992.

En lo referente a la normativa dictada por las Asambleas Legislativas de las diversas Comunidades Autónomas, es de señalar, en la Diputación Foral de Navarra, la Ley 6/1990, de Administración Local, de 2 de julio. En el País Vasco se promulgó la Ley ya citada 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del Concierto Económico a las Leyes Reguladoras de Haciendas Locales y de Tasas y Precios Públicos.

4. **Resoluciones del Tribunal Constitucional que afectan a la normativa presupuestaria**

El Tribunal Constitucional, en relación con las leyes posteriormente mencionadas y por las sentencias dictadas, ha declarado:

a) En relación a la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985:

- Que el art. 10, apartados 2.b), c), i), y párrafo *in fine* no son contrarios a la Constitución, interpretados en los términos contenidos en el fundamento jurídico 3º.
- Que el art. 78.3, no es contrario a la Constitución interpretado en los términos contenidos en el fundamento jurídico 16º.
- Que es inconstitucional el párrafo segundo de la disposición final undécima de dicha Ley, relativo a la regulación de los mecanismos de libramiento de las consignaciones a favor de las Comunidades Autónomas correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial.

(STC 96/90, de 24 de mayo)

b) En relación a la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983:

- Que es inconstitucional y consiguientemente nula la disposición adicional segunda, en cuanto que reconoce efectos retroactivos entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de abril de 1983, a la supresión de la sexta parte del sueldo consolidado a efectos del cálculo de las pensiones de la MUNPAL causadas en dicho período.

(STC 97/90, de 24 de mayo)

OBSERVACIONES GENERALES

Del contenido del Informe Anual sobre la gestión del Sector Público en 1990 se deducen las observaciones generales que se exponen en este epígrafe. A continuación se presentan las mismas estructuradas por apartados del Informe. Como ocurriera en los informes relativos a los ejercicios económicos anteriores se exceptúan las referidas al apartado I del Sector Público Estatal, dado que el mismo recoge el desarrollo de la Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado que emite este Tribunal de forma diferenciada, y de acuerdo con lo prevenido en el art. 10 de la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo.

SECTOR PÚBLICO ESTATAL

Análisis de los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos Autónomos

El importe de las **modificaciones presupuestarias** del Estado y de sus Organismos autónomos -ámbito al que se refiere este análisis cuando no se hace mención expresa a otro distinto- asciende a 3,36 billones de pesetas, que suponen un 22% de aumento sobre los créditos iniciales. Excluidas, por sus especiales características, las modificaciones en los capítulos 8 y 9 (operaciones financieras) dicha cifra se sitúa en 0,98 billones y el porcentaje de aumento en un 7%. Las modificaciones son sensiblemente inferiores a las del ejercicio precedente, si bien para valorar este hecho debe tenerse presente que los Presupuestos Generales del Estado se aprobaron el 29 de junio habiendo quedado prorrogados hasta dicha fecha las del ejercicio anterior. De las modificaciones autorizadas durante la prórroga no se han computado 0,32 billones que quedaron anuladas por haber sido consideradas en la elaboración del **Presupuesto** definitivo. De otra parte, numerosos gastos realizados en el ejercicio, a los que se hará referencia posteriormente, no se contrajeron en cuentas, lo que hacía ociosa la modificación presupuestaria que habría de darles cobertura financiera.

Los programas que han sufrido modificación han sido 218 sobre un total de 237, cifra suficientemente indicativa de la relatividad del término "vinculante" en cuanto expresión de los efectos del presupuesto sobre el gasto público.

La mayor parte (83%) de las modificaciones se ha instrumentado mediante ampliaciones de crédito, figura que supone las mayores excepciones a los principios presupuestarios. Aun cuando se prescinda de las efectuadas en créditos para operaciones financieras, continúa siendo la figura más relevante en el aspecto cuantitativo (46% del total). Su empleo podría haberse reducido considerablemente con un mayor rigor en la presupuestación, como lo demuestra su reiteración anual y la justificación que se aduce en los expedientes.

Las modificaciones, vía transferencias, han importado 0,33 billones de aumento e idéntica cifra en baja. Pese a su disminución respecto a años anteriores, esta figura modificativa, continúa empleándose amplia y profusamente. Su racionalidad no puede apreciarse, por lo general, ya que no se pone de manifiesto en los expedientes cuándo tiene por finalidad el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y cuándo es consecuencia de un cambio en los mismos o de meras imprevisiones presupuestarias.

Las incorporaciones de remanentes de crédito del ejercicio anterior se han elevado a 0,41 billones de pesetas. Estas modificaciones se producen en gran medida por demoras en la ejecución de las inversiones que dan lugar cada año a remanentes que al ejercicio siguiente se procede a su incorporación.

Las restantes figuras modificativas, tanto si se consideran singularizadamente como en conjunto, carecen de relevancia cuantitativa (2% del total).

Atendiendo a la naturaleza económica de los créditos, destacan, al igual que años precedentes, las modificaciones, ya mencionadas, en operaciones financieras que alcanzan 2,38 billones, lo que representa el 71% del total modificaciones y un 177% de aumento sobre créditos iniciales. Estas modificaciones son debidas fundamentalmente a la amortización no prevista presupuestariamente de diversas emisiones de Deuda.

Las modificaciones en los créditos para operaciones de capital (18% sobre créditos iniciales) y en los de operaciones corrientes (5%) son inferiores a las de años precedentes, hecho en cuya valoración hay que tener en cuenta las circunstancias ya indicadas.

El análisis orgánico de las modificaciones, que atiende a su clasificación por centros responsables de la gestión, revela que el abanico va desde un 25% de aumento en los créditos iniciales del Ministerio de Agricultura y un 20% en los de Cultura, hasta un 2% en los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Asuntos Sociales. También son los Organismos autónomos de Agricultura (52% de las modificaciones del subsector) los que mayores incrementos han experimentado.

Los gastos presupuestarios del Estado y de sus Organismos autónomos, en términos de obligaciones reconocidas y según las cuentas rendidas, ascienden en el ejercicio 1.990 a 16,32 billones de pesetas (de ellos 1,95 billones corresponden al capítulo 9 "Pasivos financieros"), lo que supone un incremento de 0,64 billones respecto al ejercicio precedente y una variación interanual positiva del 4%. Este aumento de gasto es moderado y viene especialmente afectado por la disminución de 0,54 billones experimentada en el capítulo 9. Excluido éste, los gastos presupuestarios del ejercicio aumentan un 9%, correspondiendo a las inversiones reales el mayor incremento (22%) y a activos financieros la mayor disminución (61%).

Los 16,32 billones de pesetas antes aludidos representan, de otro lado, un grado de ejecución sobre créditos definitivos del 87%, con un remanente de crédito de 2,5 billones, que se concentra principalmente en las secciones presupuestarias de Deuda Pública (1,47 billones), seguida a gran distancia por la Sección 31 "Gastos de diversos Ministerios" y Defensa, en lo que se refiere al subsector Estado, y en el Instituto Nacional de Empleo por lo que respecta a los Organismos autónomos.

Ahora bien, estos datos relativos al gasto presupuestario del Estado y de sus Organismos autónomos, deducidos de las cuentas rendidas, carecen de rigor y exactitud, por cuanto, según aparece con más detalle en la Declaración definitiva, se ha detectado la existencia de numerosas partidas de gastos generados en el ejercicio, por un importe conjunto y aproximado de 0,58 billones de pesetas, que, debiendo imputarse, no se han imputado al presupuesto del ejercicio. Además, por gastos originados en ejercicios anteriores a 1990, a 31/12/90 había una carga presupuestaria pendiente de aplicar al presupuesto situada en torno a 1,1 billones de pesetas.

Hay, por otra parte, 0,66 billones de pesetas de intereses de letras y pagarés del Tesoro devengados y no vencidos a la indicada fecha, cuya imputación presupuestaria, de conformidad con la normativa vigente, se realiza en el ejercicio correspondiente a su vencimiento.

Los ingresos presupuestarios del Estado y de sus Organismos autónomos, en términos de derechos reconocidos netos y según las cuentas rendidas, se elevan en el ejercicio 1990 a 17,57 billones de pesetas -de los que 4,62 billones corresponden al capítulo 9 "Pasivos financieros"-, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior del 13%. Este aumento, si se excluye el capítulo 9, bajaría hasta el 8%, variación que es debida, fundamentalmente, a los incrementos registrados en el I.R.P.F. (7%), Impuesto de Sociedades (15%) e I.V.A. (6%).

Excluido el capítulo 9, los derechos reconocidos netos del Estado y de sus Organismos autónomos, en cifras totales, coincide aproximadamente con las previsiones, si bien ello es consecuencia, básicamente, de la compensación que se produce entre la desviación favorable (mayores realizaciones que previsiones) del 7% registrada en los impuestos directos (incluidas cotizaciones al INEM por desempleo y formación profesional) y la desfavorable del 8% en los indirectos.

Sin embargo, estos datos sobre los ingresos presupuestarios, deducidos de las cuentas rendidas, aunque en menor medida que lo que ocurre en los gastos, tampoco pueden considerarse rigurosos y exactos. Se han detectado, en efecto, algunas partidas de ingresos -si bien es cierto que por importe poco significativo en relación con las cifras aquí manejadas- que, debiéndose imputar, no se han imputado al presupuesto de 1990. Además, procedentes de ejercicios anteriores al indicado, permanecían sin aplicar presupuestariamente, a 31/12/90, ingresos por diversos conceptos cercanos a 0,3 billones de pesetas.

Por otra parte, distorsiona también el análisis de la liquidación del presupuesto de ingresos, la imputación a un ejercicio u otro de las devoluciones de impuestos, particularmente en el caso de determinadas figuras impositivas en las que las devoluciones son consecuencia de su mecánica liquidatoria. El ejercicio 1990 soportó aproximadamente 0,33 billones de pesetas por el concepto de devoluciones del IRPF/88 frente a los 0,13 billones que, por devoluciones del IRPF/89 e IVA, se trasladaron a 1991.

El déficit presupuestario conjunto del Estado y de sus Organismos autónomos (diferencia entre las obligaciones y derechos reconocidos en el ejercicio), según las cuentas rendidas, ascienden a 1,10 billones de pesetas frente al inicialmente previsto de 1,18 billones. Ahora bien, si se ajusta incluyendo los gastos e ingresos que, según lo indicado anteriormente, habiéndose generado en el ejercicio se han dejado de imputar presupuestariamente a él, dicho déficit pasaría a ser aproximadamente de 1,66 billones, y si se hubieran regularizado en el mismo todas las partidas pendientes de ejercicios anteriores al de 1990, se habría situado en torno a los 2,46 billones de pesetas.

El análisis del presupuesto funcional, como en ejercicios anteriores, ha puesto de manifiesto importantes carencias de información, incluso en relación a los programas que deberían haber servido de experiencia piloto en 1990, que impiden a este Tribunal pronunciarse sobre el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos en los programas y, por ende, sobre la eficacia, eficiencia y economía de su gestión.

Respecto del análisis del flujo de fondos producido entre las Comunidades Europeas y el Estado Español a lo largo de 1990, se han obtenido tres saldos diferentes, según los criterios de contabilización que se consideren, aunque todos ellos favorables al Estado español. Atendiendo estrictamente al flujo financiero producido (principio de caja), el saldo resultante es de 118.661 millones de pesetas (35% menos que el del ejercicio anterior). Si se periodifican los conceptos susceptibles de tal operación (principio de devengo), el saldo que se pone de manifiesto es de 181.225 millones de pesetas (14% más que en el año anterior). Por último, restringiendo el análisis exclusivamente a las operaciones con reflejo presupuestario, el saldo obtenido es de 89.468 millones de pesetas (54% menos que en el ejercicio anterior), aunque esta última comparación no es homogénea al haber sido excluidas ciertas operaciones, a partir del presente año, de su consideración presupuestaria.

Lo expuesto en los párrafos anteriores pone de manifiesto la existencia de importantes defectos relacionados con la presupuestación y con la contabilidad pública, referidos al Estado y a sus Organismos autónomos. Se presupuesta con escaso rigor como puede inducirse de la existencia de numerosas modificaciones de los créditos que no responden a necesidades nuevas o imprevisibles, dando lugar, por otra parte, a que el gasto realizado se aleje bastante, en cuantía y naturaleza, del previsto inicialmente. De otro lado las cuentas públicas no recogen en su integridad los gastos realizados y, en menor medida, los ingresos, trasladando a ejercicios posteriores su imputación presupuestaria. Todo ello, al margen de la irregularidad intrínseca que, en muchos casos, supone, constituye un serio condicionante para abordar sobre datos fiables la toma de decisiones de política económica, que permitan mejorar los niveles de eficacia y eficiencia del sector público y, subsidiariamente, de la economía nacional, empeñada en responder satisfactoriamente al reto que representa para España la actual coyuntura de crisis y el proceso de integración europea.

Análisis de la gestión económico-financiera del Estado y sus Organismos Autónomos (Fiscalizaciones específicas)

En la fiscalización de la gestión económico-financiera del **Instituto Nacional de Estadística** se han detectado los siguientes aspectos negativos, que son objeto de recomendaciones de mejora por parte de este Tribunal: a) debilidades de control interno principalmente en las áreas de Inmovilizado, Existencias, Ingresos, Personal y Tesorería; b) deficiencias en la contabilidad; c) incorrecta gestión de algunos ingresos, en especial de los procedentes de la venta de publicaciones y del convenio suscrito con la Agencia Eurostat; d) una inadecuada elaboración del Presupuesto; e) la disociación entre la gestión presupuestaria y la contractual, así como una defectuosa justificación de la contratación directa y de la razonabilidad económica de dos expedientes de gasto; f) deficiencias en la gestión de personal, destacando especialmente la realización de algunos pagos sin crédito presupuestario (formalizados en ejercicios posteriores), la falta de justificación documental de las nóminas, el abono incorrecto de retribuciones en especie (viviendas de los Delegados) y el reconocimiento de gratificaciones extraordinarias insuficientemente justificadas y g) una inadecuada gestión de la tesorería, con grandes retrasos en el ingreso en los Organismos competentes de las retenciones practicadas al personal por IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, así como una deficiente gestión del sistema de pagos a justificar.

Por lo que se refiere al examen de los procedimientos y contabilidad de los ingresos procedentes de la **venta de bienes e inversiones reales del Estado, alquileres y concesiones administrativas**, la fiscalización practicada ha puesto de manifiesto, en primer lugar, notables debilidades de control interno. Las más importantes consisten en : la inexistencia de instrucciones claras y detalladas; la ineficacia del sistema de control contable; la no realización de las "actuaciones comprobatorias posteriores" establecidas en el artículo 95.6 de la Ley General Presupuestaria; la inexistencia de inventarios; la falta de control sobre las existencias; la utilización general del sistema "contraído por recaudado"; la

inexistencia de controles sobre las cajas de metálico; y la falta de un desarrollo del sistema general contable en el ámbito de la gestión de ingresos.

Además de las deficiencias anteriores, que son aplicables a todos los conceptos examinados, cabe citar algunas otras de carácter particular, como: a) la detracción directa del importe de lo recaudado para atender comisiones y gastos, algunos de ellos no justificados (por ejemplo, el quebranto de moneda en la recaudación por venta de impresos del I.R.P.F.); b) el alto porcentaje de incorrección de las imputaciones presupuestarias (con especial incidencia en los conceptos de venta de bienes y enajenación de inversiones reales del Estado); c) la falta de seguimiento y control sobre los deudores (por ejemplo, en el área de alquileres) y d) la falta de eficacia en algunas actuaciones concretas (como la enajenación de carriles y traviesas de la línea de ferrocarril abandonada Baeza-Utiel y la operación de venta de oro y plata al Banco de España por parte del Tesoro Público).

La fiscalización del subprograma relativo al "Control y actividades en el marco del Régimen de ayudas de la CEE al Aceite de Oliva" gestionado en su totalidad por la Agencia para el aceite de Oliva (AAO), ha puesto de manifiesto la existencia de un retraso considerable en la entrada en funcionamiento de la Agencia, no habiéndose constituido su Consejo Asesor a la fecha de la fiscalización (marzo de 1992). El programa de las actividades de control para la campaña 1989/90 acusa la falta de medios humanos y materiales de la AAO en su período inicial de funcionamiento. Como consecuencia de ello, aun cuando el procedimiento de control de oleicultores resulta adecuado para garantizar el cumplimiento de objetivos que le asigna la reglamentación comunitaria, la dotación de inspectores es insuficiente para cubrir (en los porcentajes establecidos) el elevado número de sujetos sometidos a control. Asímismo, la ausencia de un Registro Oleícola fiable y el insuficiente desarrollo normativo de las obligaciones que incumben a las Organizaciones de Productores Reconocidas (OPR) impidieron a la Agencia obtener evidencia suficiente de su cumplimiento. Respecto a los controles de las almazaras autorizadas se ha comprobado, asímismo, la existencia de deficiencias en el procedimiento que le impiden garantizar que la cantidad de aceite producido por la almazara no ha sido alterada.

Respecto a los **préstamos concedidos por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura** se han detectado importantes deficiencias de control interno. En lo que se refiere a los préstamos concedidos a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales no existe un adecuado sistema de coordinación que permita a la Dirección General controlar la deuda real de estos Entes Territoriales. Por otra parte, los defectos observados en la documentación de los expedientes de los apoyos financieros y de las ayudas económicas y personales impiden asegurar que se hayan cumplido todos los requisitos exigidos para el acceso a estas ayudas. Asímismo, se han observado deficiencias en la coordinación y suministro de información entre la Dirección General y las entidades financieras que actúan de intermediarias en la gestión.

Los resultados de la fiscalización de los **sistemas de seguimiento de los indicadores de eficacia en la Dirección General de Correos y Telégrafos** han puesto de manifiesto la falta de fiabilidad de los valores de realización de los mencionados indicadores que presenta el Centro gestor. El Tribunal ha comprobado que la Dirección General controla exclusivamente un reducido número de los indicadores definidos en su programa presupuestario 521A y que los sistemas de seguimiento implantados sobre estos últimos presentan grandes deficiencias. Con independencia de las reservas con que deben ser considerados dichos indicadores, se deduce de los mismos un bajo nivel de realización respecto de lo previsto en algunos de los productos del Centro gestor, especialmente en los servicios de telegramas urgentes y "Postal Exprés".

De la fiscalización relativa al Programa 724 B **"Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial"** -gestionado por la Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnológica (SGPIT), La Dirección General de Industria (DGI) y el Organismo Autónomo Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPI)- se deduce, en primer lugar, que existe una falta de adecuación entre los objetivos e indicadores y la realidad del programa, lo que ha impedido efectuar un análisis de la ejecución presupuestaria en términos de eficacia. En cuanto a la gestión realizada por los Centros Directivos, se ha observado lo siguiente:

a) No se han efectuado autorizaciones ni disposiciones de crédito en el subprograma 4, gestionado por la DGI y destinado a subvencionar la modernización industrial dél sector textil-piel. Esto puede atribuirse al largo proceso de negociación y a las discrepancias existentes entre las autoridades nacionales y la Comisión de las Comunidades Europeas.

b) En la desinversión de la participación del IMPI en las Sociedades de Garantía Recíproca el importe obtenido de la venta representa el 18% del valor nominal de las acciones, con una pérdida de 1.971 millones de pesetas. En este Organismo se observa una falta de adaptación de su normativa al nuevo marco de actuación y la existencia de determinadas deficiencias en la presupuestación y aplicación de los gastos correspondientes al capítulo 6º "Inversiones reales".

c) Existe confusionismo y cierta rigidez en el procedimiento para conceder las subvenciones del subprograma 2, gestionado por la SGPIT, destinadas al Plan de promoción de diseño, calidad y moda para la pequeña y mediana empresa manufacturera, al existir una doble normativa de aplicación.

En la fiscalización del **control y seguimiento de las subvenciones concedidas al sector privado** se ha detectado, en términos generales, que las resoluciones de concesión de las subvenciones son ambiguas -tanto en lo que se refiere al establecimiento de plazos para que el beneficio justifique las inversiones que deba realizar como, en algunos casos, en cuanto al contenido concreto de los compromisos que asume-, lo que dificulta las funciones de control y seguimiento posterior por parte de los Centros gestores. Se ha detectado también que, en algún caso, los órganos concedentes de las subvenciones no han reclamado el reintegro de las no justificadas y, cuando lo han hecho, no han solicitado, en la mayoría de las ocasiones, el correspondiente interés de demora, tal y como establece el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

De la fiscalización de **subvenciones otorgadas por diversos Ministerios y, dentro de ellas, de las financiadas con la asignación tributaria del I.R.P.F.** se deduce que:

a) Las subvenciones gestionadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo se han ajustado, en general, por lo que respecta a su concesión, a los principios de publicidad y libre concurrencia, si bien se ha observado un desigual seguimiento de la justificación a aportar por los beneficiarios, puesto que, en muchos casos, es correcta pero, en otros, no resulta adecuada para acreditar la aplicación de los fondos o se demora su exigencia.

b) En las subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los Fondos de Promoción de Empleo, de las que no se han rendido cuentas, contrariamente a lo que era exigible, hasta su reclamación por el Tribunal, destaca, al margen de la heterogeneidad entre los estados financieros presentados por los distintos Fondos, la falta de la liquidación definitiva de las ayudas otorgadas en el ejercicio, que resulta necesaria dado que los libramientos tienen sólo el carácter de "a cuenta del déficit". Respecto a las subvenciones concedidas por el indicado Ministerio para prestaciones del llamado "síndrome tóxico", cuyas cuentas formuladas por la correspondiente Oficina fueron remitidas, al igual que el caso anterior, a requerimiento del Tribunal, lo más destacable es el importante desfase temporal que se produce entre el ejercicio en que se realiza el gasto y el de su imputación presupuestaria.

c) El Ministerio de Cultura no se ha ajustado, por lo general, a las prescripciones legales sobre publicidad, y en la justificación y el control de las ayudas se observan serias deficiencias. Las cuentas justificativas frecuentemente se demoran y en algunos casos los justificantes aportados no son idóneos a efectos de acreditar la aplicación de los fondos a sus fines.

d) La financiación de la Iglesia Católica a través de la asignación tributaria del I.R.P.F. que, instrumentada por la Ley de Presupuestos de 1988 en desarrollo del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, ha venido a sustituir al mecanismo imperante hasta 1987, ha mostrado su insuficiencia para la cobertura de las necesidades de la Iglesia Católica que el Estado debe asumir, en virtud de los compromisos contraídos y que constituyen el origen mismo de la asignación tributaria.

e) Respecto a las subvenciones que se financian con la parte de la asignación tributaria del I.R.P.F. destinada a otros fines de interés social, se observa que, además de la existencia de notables retrasos en la justificación de las subvenciones concedidas, no se ha respetado de forma escrupulosa lo dispuesto en la normativa específica que las regula sobre los beneficiarios de las subvenciones y los fines concretos a subvencionar.

De la fiscalización de los **gastos derivados de la contratación militar en el extranjero y de la gestión de los fondos públicos situados en el exterior para esta finalidad** se deduce que:

a) La tramitación de los expedientes de contratación no se ajusta frecuentemente a lo dispuesto en el R.D. 1120/77, de 3 de mayo, y en la Orden Ministerial de 16 de junio de 1988 que lo desarrolla, normas que regulan este tipo de contratación, presentando diversas carencias y deficiencias documentales que se ponen de manifiesto en el Informe.

b) La justificación definitiva de las inversiones sufre grandes retrasos, hasta el extremo de que, en julio de 1992, permanecían pendientes de dicha justificación 206.142 millones de pesetas, correspondientes a fondos librados en el período

1982-1990 y destinados a contratos que, según la documentación obrante en este Tribunal, se habrían finalizado dentro del indicado período.

c) El control de los fondos públicos situados en el exterior y destinados a la adquisición de material militar en el extranjero se considera muy deficiente, porque los saldos de las cuentas abiertas en instituciones de crédito españolas a nombre de las Agregadurías Militares en que se encuentran depositados, no se registran en las cuentas oficiales rendidas a este Tribunal y, en alguna de ellas, la disposición de los fondos puede realizarse mediante firma indistinta de los funcionarios habilitados al efecto.

d) Los saldos de tesorería en 31/12/90, mantenidos en las indicadas cuentas y valorados al tipo de cambio de las correspondientes divisas a dicha fecha ascendían a 21.359 millones de pesetas, sin que exista justificación para mantener cuantías tan elevadas de numerario fuera del Banco de España y en su mayor parte en la banca privada. De dicho saldo, 12.272 millones estaban situados en cuentas específicas para adquisiciones de material y servicios (denominados FAMS) y 9.087 millones en cuentas de intereses, en las que, al margen de las operaciones expresadas en el punto e) posterior, se han venido acumulando los intereses activos generados a lo largo de varios años, en lugar de proceder -como viene exigido por las normas aplicables- a su ingreso en las cuentas del Tesoro Público y consiguiente aplicación al presupuesto de ingresos, lo que sólo a partir de 1991 comienza a realizarse, habiéndose acreditado hasta abril de 1992 el ingreso en el Tesoro Público de un total de 7.362 millones de pesetas.

e) Las cuentas de intereses se han utilizado para finalidades que no le son propias, y concretamente para operaciones de ingresos, pago, anticipo de pagos y devolución de anticipos, relacionadas con la contratación militar aquí examinada -que deberían haberse instrumentado a través de las cuentas FAMS- y para otras atenciones de las Agregadurías Militares ajenas a dicha contratación, por lo que no puede identificarse su saldo a 31/12/90 con el importe de los intereses acumulados hasta la indicada fecha.

Sociedades Estatales no Financieras

El examen y comprobación formal efectuado por el Tribunal ha alcanzado para el ejercicio de 1990 a 333 cuentas de Sociedades Estatales en las que el Estado participa de forma mayoritaria directa o indirectamente, de las 470 que deberían haberlas rendido, así como las cuentas correspondientes a otros ejercicios de 69 Sociedades.

Del **examen de las cuentas rendidas** se deduce que en el ejercicio de 1990 hay 161 en las que el saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias es acreedor, de este grupo las cinco Sociedades que han obtenido mayores beneficios son la "Empresa Nacional de Electricidad S.A", "Repsol, S.A. "Repsol Petróleo, S.A." "Instituto Nacional de Hidrocarburos" y "Tabacalera, S.A.", 114 en las que su saldo es deudor, las cinco sociedades que arrojan mayores pérdidas son el "Instituto Nacional de Industria", "Empresa Nacional de Autocamiones, S.A"., "Iberia Líneas Aéreas de España, S.A"., "Mercados en Origen, S.A"., "E.N. Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A"., y otras 58 que presentan saldo cero. De las correspondientes a ejercicios anteriores, 17 de ellas presentan saldo deudor, 25 saldo acreedor y 27 saldo cero. Un 11% de las Sociedades Estatales no financieras presentan a 31 de diciembre de 1990 un neto patrimonial negativo, con lo que estas Sociedades se hallarán incursas en los supuestos que contemplan los artículos 163 y 260.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, como causa de obligatoria reducción de capital y de disolución de las sociedades, salvo que se subsane esta situación. Las cinco sociedades que presentan el neto patrimonial negativo más elevado son: "E.N. Santa Bárbara, S.A.", "E.N. de Autocamiones, S.A.", "Mercados en Origen, S.A.", "Potasas de Navarra, S.A.", "Repsol Explotación Norway A/S". El resto de sociedades, entre las que han rendido sus cuentas, presentan neto patrimonial positivo (89%). Las cinco que lo tienen más elevado son: "E.N. de Electricidad S.A.", "RENFE", "REPSOL S.A.", "Instituto Nacional de Hidrocarburos" y el "Instituto Nacional de Industria".

Los **estados financieros consolidados del Instituto Nacional de Industria** (INI) presentan una pérdida de 63.172 millones de pesetas como resultado del Grupo en el ejercicio 1990, lo que supone un incremento de las pérdidas respecto a las del ejercicio anterior de un 50 %. Los resultados de la Explotación fueron negativos en 6.511 millones de pesetas, cuando en el ejercicio anterior la cuenta de Explotación ofrecía un saldo favorable de 52.138 millones de pesetas. La estructura financiera del Grupo da lugar a que se financie parte del inmovilizado con créditos a corto plazo.

Los **estados financieros consolidados del Instituto Nacional de Hidrocarburos** (INH) presentan unos resultados positivos (antes de impuestos) de 121.695 millones de pesetas, 12.133. millones de pesetas menos que en el ejercicio anterior, debido principalmente a la disminución de beneficio de la Cartera de Valores que descendió en 39.513 millones de pesetas (un 78%) con respecto al año anterior, mientras que hubo un mayor beneficio de explotación de 10.788 millones de pesetas y también se mejoraron los resultados extraordinarios en 16.592 millones de pesetas. El fondo de maniobra a 31 de diciembre de 1990 era negativo en 28.293 millones de pesetas, con una reducción de 54.012 millones de pesetas con respecto al existente al final del ejercicio anterior.

En el análisis individualizado de las cuentas se han apreciado ciertas anomalías generalizadas en la adaptación de las empresas a la nueva legislación societaria promulgada a partir de la Ley 19/1989 de 23 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica europea, en materia de Sociedades, así como ciertas anomalías individualizadas que se denuncian en el cuerpo del informe.

Con respecto a los **programas de actuación, inversiones y financiación** se ha puesto de manifiesto la poca adecuación de este documento a las necesidades de las Sociedades Estatales, tanto por la fecha en que se debe elaborar como por su falta de seguimiento y de requerimiento en los casos en que no se elabora el mismo. Las mayores desviaciones con respecto a lo programado se explicitan en el cuerpo del informe.

Sociedades Estatales Financieras

Por lo que respecta al **Instituto de Crédito Oficial** se ha examinado especialmente en este ejercicio la deuda del Tesoro con el ICO y con las restantes Entidades Oficiales de Crédito integrantes del Grupo. Esta deuda asciende a 31 de diciembre de 1990 a 113.768 millones de pesetas, de los que 93.446 corresponden a ejercicios anteriores. La deuda directa con el I.C.O., a la citada fecha, es de 46.228 millones y de 67.540 millones la deuda con las restantes Entidades Oficiales de Crédito.

La cuantía total de la deuda viene incrementándose ejercicio tras ejercicio como consecuencia de la aplicación de las distintas normas que regulan los mecanismos excepcionales de apoyo oficial -a la exportación, préstamos extraordinarios para paliar daños de inundaciones y otros daños catastróficos y préstamos y avales a empresas de sectores en reconversión industrial-, siendo insuficiente la dotación presupuestaria para estos conceptos y no utilizándose la posibilidad que ofrece su condición de créditos ampliables.

Las **verificaciones** llevadas a cabo en el **Banco de Crédito Agrícola** han puesto de manifiesto la deficiente gestión informática de la Entidad, situación que se mantiene desde 1984. Los intentos de resolver este problema han ido fracasando sucesivamente, no ajenos a la decisión de los diferentes accionistas únicos de la Entidad que han ido modificando los diversos proyectos de solución y diferiéndolos en el tiempo. Por otra parte, en los expedientes de crédito en los que se ha analizado el procedimiento de concesión no se han detectado incidencias significativas, pero se ha reflejado una política de negociación del Banco para obtener de sus clientes contraprestaciones por la concesión que se estima poco adecuada.

El **Banco de Crédito Industrial** presentó en 1990 una disminución del 30% respecto al ejercicio anterior en el capítulo de Tesorería e intermediarios financieros, con un importe de 73.760 millones de pesetas.

En esta Entidad, la inversión crediticia neta ascendió a 894.021 millones de pesetas, con un crecimiento del 1% respecto a 1989, aumentando la inversión crediticia en términos de mercado y disminuyendo los créditos de política económica y excepcionales. Los recursos propios del Banco, antes de la aplicación de beneficio, ascendieron 66.918 millones de pesetas, lo que representa un incremento anual del 3%. El margen de explotación de la Entidad se elevó a 57.096 millones, con un crecimiento del 10%.

La actividad creditica del **Banco de Crédito Local** ha resultado en el ejercicio orientada fundamentalmente a la financiación de las Corporaciones Locales, concediendo, principalmente, créditos a medio y largo plazo, destinados a la puesta en marcha de proyectos de inversión en sectores básicos de equipamiento. La cuota de mercado del Banco en la financiación de Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas ascendió, al término del ejercicio, al 47,2%.

Analizado el funcionamiento de la Central de Información de Riesgos del Crédito Local, cuya gestión técnica corresponde al Banco, se ha puesto de manifiesto la ausencia de un censo completo de entes locales y sociedades dependientes de los mismos. Por otra parte, el Banco no ha concedido atención al seguimiento y control del procedimiento de concesión de créditos para financiar los planes de empleo rural, en especial en lo que se refiere a la obtención de detalle técnico de los proyectos, mantenimiento de relación directa con el INEM para verificar los proyectos subvencionados y comprobación de la aplicación de la inversión a la finalidad a la que se adjudicó el crédito, a pesar de haberse reservado esta facultad en las condiciones generales del contrato.

Con relación al **Banco Hipotecario de España, S.A.**, destaca la variación de las cuentas de "acreedores" y "empréstitos", con unos incrementos de 48.386 y 142.725 millones de pesetas, respectivamente, consecuencia de la orientación del Banco hacia una mayor captación de recursos en el sector privado en sustitución de los procedentes del ICO, propiciada, a su vez, por la expansión de su red de oficinas. La modificación de la estructura financiera y la ampliación de la red de sucursales ha supuesto para el Banco un incremento importante de los costes financieros y de explotación, a pesar de lo cual los beneficios de han incrementado en un 29,5% como consecuencia, principalmente, del aumento de los productos financieros de inversiones crediticias.

Analizada la gestión del Banco para la recuperación de la deuda vencida e impagada se ha puesto de manifiesto que, a pesar de la evolución positiva experimentada por aquélla, dista mucho de ser eficaz.

En el **Banco Exterior de España, S.A.** la inversión crediticia bruta normal experimentó en el ejercicio un crecimiento del 9,8% y los "fondos de provisión para insolvencias" aplicables a estos créditos disminuyeron en un 12,7%, mientras que la inversión crediticia bruta en créditos de mediación disminuyó en un 18,7%, y los "fondos de provisión para insolvencias" correspondientes aumentaron en el 19,3%. Al 31 de diciembre de 1990, la inversión crediticia total en situación de mora o dudoso cobro, excluidos los riesgos de transferencia mantenidos con países muy dudosos, alcanzaba el importe de 184.970 millones de pesetas, el 14,4% del total de la inversión crediticia cuando en el ejercicio 1989 fue del 13,7%. Del importe total citado se encontraban garantizados por CESCE y otras Entidades del sector público 141.971 millones de pesetas y por otros garantes 4.168 millones, por lo que los riesgos necesitados de cobertura ascendieron a 38.232 millones. Para cubrir los riesgos de transferencia y los riesgos por insolvencia el Banco Exterior tenía constituidos, a 31 de diciembre de 1990, fondos de provisión por valor de 73.192 millones de pesetas.

El resultado neto del ejercicio ascendió a 15.675 millones de pesetas, el 15,3% de los recursos propios, inferior al porcentaje medio de la Banca.

Verificado el grado de cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas de las Sociedades participadas del Grupo Banco Exterior, se ha puesto de manifiesto, entre otras deficiencias que se recogen en el Informe, que 18 Entidades no habían iniciado el proceso de rendición. A pesar de la evolución positiva experimentada al respecto, a 30 de septiembre de 1993 aún no se había normalizado completamente la situación en todas la Sociedades participadas, en relación a sus cuentas de 1990.

Por lo que se refiere a las Sociedades Estatales de Seguros hay que destacar el incremento en **MUSINI** del 75,5%, respecto al ejercicio anterior, de las primas directamente emitidas -que, netas de anulaciones y sin recargo adicional ascendieron a 33.634 millones de pesetas-, que ha tenido lugar, fundamentalmente, en el ramo de vida. Asimismo, la siniestralidad del ejercicio ascendió a 18.782,6 millones. El resultado técnico financiero, 2.446 millones de pesetas, disminuyó un 16%, manteniéndose el resultado del ejercicio antes de impuestos similar al del ejercicio anterior, con un ligero aumento del 3%, y alcanzando los 4.281 millones.

Por su parte, en **CESCE**, los epígrafes que presentan en el activo una variación más significativa son "efectivo en bancos y otras instituciones de crédito, caja y cheques", con un incremento del 86%, 1.830 millones de pesetas, y "créditos", con una variación positiva de 1.299 millones, el 272%, de los cuales la Entidad tiene 864 millones contra asegurados por recibos de primas pendientes de cobro de riesgos por cuenta del Estado. En el pasivo, las cuentas con la Administración del Estado, por la gestión de riesgos cubiertos por su cuenta, con un aumento de 3.068 millones de pesetas, presentan la mayor variación respecto al ejercicio anterior. El valor de las operaciones aseguradas por cuenta del Estado ha experimentado un aumento del 34% respecto a 1989, produciéndose el crecimiento más destacado de la contratación en la modalidad de "crédito comprador".

El resultado técnico financiero ofrece un saldo de 1.038 millones de pesetas, el 45,2% menos que el obtenido en 1989. El resultado técnico arroja una pérdida de 810 millones, el 5.300% más que en el ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, al aumento experimentado por los gastos técnicos netos de reaseguro, 232 millones de pesetas, y pór otros gastos de explotación, 340 millones; a lo que hay que añadir el descenso de los ingresos de explotación, por 382 millones, que no ha podido ser compensado por el incremento de las primas adquiridas netas de reaseguro, 151 millones de pesetas.

En el momento de redactar este Informe se encuentra en curso la realización de una fiscalización específica acordada por el Pleno **al Banco de España**. Del análisis formal de la Memoria del Banco presentada al Tribunal se desprende que, durante el ejercicio 1990, el aumento neto experimentado por los valores del balance asciende a 637.369 millones de pesetas, consecuencia, fundamentalmente, del incremento en un 8% en los activos exteriores respecto a 1989, de un 72% en las cuentas que representan saldos a favor del Banco por operaciones realizadas por cuenta del Estado y de un 1.076% en los créditos a Organismos públicos y Empresas nacionales (concretamente, a la Tesorería General de la Seguridad Social); incrementos que se compensan, en parte, por la disminución de los créditos a entidades financieras en un 24% y de los saldos de la cartera de valores en un 22%.

Por lo que se refiere a la cuenta de resultados, los productos brutos obtenidos en el ejercicio ascendieron a 696.614 millones de pesetas, frente a los 639.479 millones de 1989, lo que supone un aumento del 9%.

Los gastos del ejercicio se han elevado a 460.928 millones de pesetas, frente a los 477.668 millones del ejercicio anterior, destacando la disminución producida en gastos financieros (39.200 millones de pesetas), debido fundamentalmente a la modificación habida durante este ejercicio en el coeficiente de caja de los intermediarios financieros, que provocó una minoración de 191.573 millones en la remuneración de los depósitos obligatorios para cobertura del citado coeficiente, si bien se vió compensada por la remuneración de los certificados del Banco de España.

En el conjunto de gastos la partida más importante cuantitativamente la constituye la dotación a fondos especiales y, dentro de ella, la destinada a regularización de las minusvalías netas en moneda extranjera cuyo aumento se realizó para mantener la cobertura de los activos exteriores de reserva.

La cuenta de resultados ha experimentado una mejora sobre la de 1989, alcanzándose unos resultados netos de 235.686 millones de pesetas frente a los 161.811 millones del ejercicio anterior.

Respecto a la **Sociedad Mixta de Segundo Aval** hay que señalar que durante el ejercicio 1990 ha continuado con la suspensión de contratación de operaciones de aval subsidiario, sin renunciar de un modo definitivo a esta modalidad, desarrollando su actividad en el campo del aval solidario con aumentos significativos. El riesgo vivo por avales, al finalizar el ejercicio, ascendió a 13.590 millones de pesetas, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 75%. Debido a la superación de la cobertura presupuestaria, la Sociedad asume los riegos inherentes a su actividad y, en consecuencia, en este ejercicio se han planteado las primeras incidencias sobre la cartera de riesgos en curso, que han supuesto, a fin de ejercicio, un importe de deudores en mora superior a 191 millones de pesetas, el 1,4% de la cartera de riesgo vivo, dotándose por 104 millones de pesetas las correspondientes provisiones para posibles insolvencias.

El beneficio neto de la Sociedad ascendió a 59 millones, inferior en un 8% al del ejercicio anterior.

Por lo que respecta a los **Fondos de Garantía de Depósitos**, en el de Establecimientos Bancarios, durante 1990, por Ley 4/1990, de 29 de junio, se han incrementado las aportaciones de los Bancos integrados en él hasta alcanzar el 2,5 por mil de los depósitos computables, estableciéndose la del Banco de España, en el 50% de aquéllas. Por otra parte, se ha continuado, como en ejercicios anteriores, la política de desinversión de los activos adquiridos a los Bancos en crisis que, junto con la paulatina disminución de las cargas financieras y el aumento de las aportaciones, ha permitido a la Entidad reducir su endeudamiento con el Banco de España de 349.500 millones de pesetas, en 1989, a 276.500 millones en 1990, y las pérdidas del fondo patrimonial acumulado a 45.962 millones de pesetas. El Fondo en Cajas de Ahorro, por su parte, ha otorgado ayudas en el ejercicio por 6.900 millones de pesetas, elevándose el saldo de activos contingentes a 8.987 millones, con un fondo para insolvencias de 8.540 millones, y ascendiendo su patrimonio acumulado a 139.105 millones. El Fondo en Cooperativas de Crédito no ha incorporado durante 1990 ninguna Cooperativa, habiéndose producido tres bajas del mismo por disolución. El fondo patrimonial acumulado de este Fondo presenta un saldo negativo de 9.008 millones de pesetas a final del ejercicio, superior en 79 millones al del ejercicio anterior. Destacan, como datos más significativos, en esta Entidad, la reducción en 3.396 millones de pesetas del endeudamiento con el Banco de España y la disminución de los préstamos a las Entidades por importe de 3.226, por devolución de los concedidos en su día para el saneamiento de las mismas.

Entes de Derecho Público

El **Consejo de Administración del Patrimonio Nacional** mantiene un considerable retraso en la terminación de los inventarios señalados en la Ley 23/1982, de 16 de julio, y en el Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo. En el último ejercicio, a pesar del importante esfuerzo realizado, estaba pendiente de aprobar el dictamen sobre la primera versión del inventario general, el inventario de bienes inmuebles se encontraba incompleto y el de bienes muebles pendiente de realizar en

siete delegaciones, acumulándose retrasos en los relativos a los bienes muebles no histórico-artísticos. Por otra parte, los ingresos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles se siguieron registrando en 1990 de acuerdo con el criterio de caja.

El Consejo de Seguridad Nuclear no ha procedido a dotar desde su constitución un fondo que recogiera la depreciación de su inmovilizado, por lo que, dado el importe del mismo, la regularización de esta situación afectaría significativamente a los resultados del ejercicio y a los resultados pendientes de aplicación.

Los recursos totales del Consejo en 1990 se integran en un 54% por recursos propios, que ascendieron a 3.798 millones. En la financiación ajena, 945 millones de pesetas, cabe destacar la existencia de una póliza suscrita con el Banco Exterior de España para la financiación de la adquisición y remodelación de la sede del Ente. En el pasivo figuran también 1.308 millones de pesetas, en partidas pendientes de aplicación, que corresponden a ingresos pendientes de aplicación por liquidación de tasas.

Los resultados corrientes del Consejo en 1990, 753 millones de pesetas, disminuyeron en un 33,5%, debido, fundamentalmente, al crecimiento de los gastos de personal y de trabajos, suministros y servicios exteriores (15,9% y 17,5%, respectivamente) y a una ligera disminución en los ingresos por tasas, dentro de los cuales, los de la tasa de inspección y control de instalaciones nucleares han supuesto en el ejercicio un 92% de los derechos reconocidos netos del Consejo.

Por otra parte, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha adoptado decisiones, en relación con las normas que regulan la tasa de inspección y control de instalaciones nucleares, que podrían estar al margen de la autorización establecida en la disposición final segunda del Real Decreto 3229/1982, de 12 de noviembre, de acuerdo con la cual, y en concordancia con el artículo 18.1 de la Ley General Tributaria, corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leyes y disposiciones tributarias, sin perjuicio del necesario desarrollo legislativo de la normativa de esta tasa.

El **Instituto Español de Comercio Exterior** ha sufrido restricciones presupuestarias contradictorias con la planificación a largo plazo realizada en su plan estratégico a pesar de lo cual la evolución en el grado de ejecución de los presupuestos anuales ha dado lugar a reintegros, por importes de gastos provisionados y no realizados posteriormente, que han ascendido en 1990 y los dos ejercicios anteriores a un importe acumulado de 6.315 millones de pesetas.

Verificado el cumplimiento de las normas de control interno de las actividades de las Oficinas del Instituto, normas que se consideran adecuadas, se ha puesto de manifiesto la necesidad de intensificar notablemente su aplicación.

El Grupo RTVE ha obtenido, por primera vez desde su constitución, un resultado negativo de 24.311 millones de pesetas, producto de la falta de acomodación de su gestión interna a la competencia de las televisiones privadas.

Por lo que se refiere a TVE, S.A., sigue sin realizarse en el ejercicio una planificación adecuada de la producción y de la emisión de programas. Se ha comprobado que las grandes series analizadas en el Informe de fiscalización del Tribunal, relativo al período 1983-87, se finalizaron manteniéndose gran parte de las observaciones señaladas en aquél momento. El análisis de los expedientes de programas de producción propia presenta debilidades de gestión en cuanto a contratación por grandes períodos, control de los expedientes y anticipos de producción.

El Grupo RTVE ha seguido subvencionando la actividad de la sociedad RNE en 24.078 millones de pesetas, al valorar su producción por 25.600 millones de pesetas, cuando los ingresos obtenidos por la comercialización de programas de Radio ascendieron a 1.522 millones de pesetas.

RETEVISION ha venido realizando un proyecto de reconstrucción del activo fijo con la colaboración de asesores externos. A finales del ejercicio, existen problemas de gestión derivados de la adquisición, valoración, contabilización y control de estos activos, originados, fundamentalmente, en el traspaso de bienes y derechos desde RTVE a RETEVISION, en el momento de su constitución. En la gestión de sus ingresos, RETEVISION ha aplicado criterios interpretativos de las normas reguladoras de las tarifas de transporte y difusión de señales de televisión, por las cuales ha dejado de repercutirse 895 millones de pesetas a los usuarios de la red de transporte de señales de televisión.

El Ente participa en el 25% del capital social de HISPASAT, S.A., constituida en 1989, Entidad que ha resultado también fiscalizada y en la que ha destacado en el ejercicio la falta de inicio de la actividad de explotación como consecuencia, fundamentalmente, de la carencia de normativa del régimen jurídico aplicable a la modalidad del servicio de difusión y televisión mediante satélite.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya fiscalización se está llevando a cabo en cumplimiento del Acuerdo del Pleno del Tribunal, en el momento de redactar este Informe, ha reflejado en su cuenta de pérdidas y ganancias un incremento del importe global de ingresos de 1.925 millones, respecto a 1989, en que empezó a desarrollarse, incremento que ha sido determinante en el beneficio del ejercicio, que ascendió a 1.384 millones de pesetas.

A pesar de que en el desarrollo experimentado por la Entidad el ejercicio 1990 ha sido decisivo, destacando, en este sentido el crecimiento de los gastos de personal y de otros gastos de explotación, los ingresos han superado los gastos realizados, de modo que, aunque no hubiera recibido las subvenciones de explotación, seguiría obteniendo unos beneficios de 735 millones de pesetas, lo que le permitiría hacer frente a su actividad con sus recursos propios.

Contratación Administrativa

De la fiscalización de los contratos administrativos celebrados durante el ejercicio 1990 se deducen una serie de observaciones que han venido destacándose en anteriores Informes de este Tribunal.

En primer lugar, continúa la falta de envío de los contratos que deben ser objeto de examen y, sobre todo, los envíos se realizan con considerable retraso, así como con insuficiencias en la documentación complementaria que debe acompañar a los mismos, circunstancias que condicionan la efectividad de esta fiscalización. Los Centros y Organismos contratantes deberían cumplir lo dispuesto por el art. 6 de la Ley de Contratos del Estado y por el art. 8 de su Reglamento, en cuanto a la **remisión de los contratos** en el tiempo y forma establecidos. Asimismo, los mencionados Centros y Organismos deben remitir directamente al Tribunal, al comienzo de cada ejercicio y sin esperar su requerimiento, las relaciones certificadas relativas a los contratos celebrados el año anterior, a las que se refiere el art. 40 de la Ley de Funcionamiento de 5 de abril de 1988.

Por lo que se refiere a las **adjudicaciones mediante subasta pública**, deben destacarse las grandes bajas obtenidas mediante la aplicación de este sistema, que frecuentemente se acercan, e incluso superan, a los porcentajes del presupuesto de contrata referidos al beneficio industrial y a los gastos de empresa. Los Centros y Organismos contratantes deberían prestar una especial atención en la elaboración de los proyectos y en la valoración de sus presupuestos, así como realizar un especial control y vigilancia de la ejecución de los contratos adjudicados con estas bajas.

En cuanto a las **adjudicaciones mediante concurso público**, si bien la nueva redacción dada por el art. 14 de la Ley de Presupuestos para 1990 a los arts. 28 y 35 de la Ley de Contratos del Estado ha equiparado los sistemas de subasta y de concurso en su aplicación a los contratos de obras desde una perspectiva de legalidad, desde un punto de vista de eficiencia se entiende que debe aplicarse con prudencia puesto que para los contratos de obras, en los que normalmente debe existir un proyecto detallado, completo y definitivo, elaborado por la Administración, que determine exactamente las condiciones técnicas de la obra, puede resultar más adecuado el sistema de subasta con admisión previa, ya que el mismo produce una más intensa depuración de los precios del contrato en beneficio de los intereses económicos de la Administración. En este sentido, debe observarse que muchos de los criterios utilizados en las adjudicaciones por concurso --como reducciones de plazos, experiencia en obras anteriores, exigencia de diagramas de ejecución, etc.-- podrían objetivarse, convirtiéndolos en determinaciones del proyecto o en requisitos a considerar en la fase de admisión previa de las subastas, con cuyo mecanismo se conseguiría una depuración de las condiciones técnicas de las empresas licitantes y de sus ofertas similar a la operada en el concurso, y sin merma de su antes aludida mayor virtud depuradora de los precios.

Por otra parte, con relación a este mismo sistema de concurso debe insistirse en la necesidad de que los pliegos de cláusulas de los contratos establezcan los criterios que han de servir de base a la adjudicación y que ésta se atenga estrictamente a los mismos, sin introducir nuevas consideraciones no previstas en dichos pliegos.

Respecto de los **contratos adjudicados directamente**, se efectúan las siguientes observaciones, consecuencia de deficiencias detectadas:

a) En primer lugar, debe llamarse la atención sobre la necesidad de reducir la aplicación de esta forma siempre excepcional de adjudicación, mediante la interpretación restrictiva de los supuestos de su procedencia; ya que junto a sus innegables ventajas de rapidez y flexibilidad encierra el grave inconveniente de limitar la concurrencia general, la cual debe considerarse de interés público, por estar basada tanto en el igual derecho de todos los empresarios capacitados para participar en la contratación pública, como en el interés de la Administración en recibir suficientemente depuradas sus ofertas mediante la libre competencia.

b) La reducida amplitud con la que en este sistema se promueve normalmente la concurrencia en la oferta, no sólo se presenta en los casos que se alegan razones de imposibilidad o inconveniencia para promoverla con carácter general, sino también en el resto de los supuestos de adjudicación directa, en los que suelen limitarse al mínimo legal de tres las consultas a los empresarios que se estiman capacitados para la ejecución del contrato, a pesar de que suelen ser muy numerosos los que ostentan clasificación suficiente al efecto. Este número resulta, en ocasiones disminuido en la práctica, ya porque alguna de las empresas consultadas no contestan o declinan la invitación, ya porque formulan proposiciones por encima del presupuesto de contrata.

Asimismo se sigue observando la falta de la documentación de las gestiones realizadas en dicha promoción de concurrencia, así como de la justificación de las razones de haberse dirigido tales gestiones a determinadas empresas y de la forma en la que se aseguró el secreto e integridad de las ofertas recibidas. Aspectos que en la contratación directa quedan totalmente al arbitrio de los respectivos órganos de contratación, por lo que sería conveniente regular los mismos mediante la normativa adecuada.

c) Las adjudicaciones directas por razones de urgencia, constituyen uno de los más frecuentes supuestos de utilización de este sistema excepcional de contratación, empleándose por la generalidad de los Departamentos ministeriales. La práctica ha puesto de manifiesto que la forma de adjudicación no guarda excesiva relación con la pronta realización del objeto de contrato, la cual debe buscarse específicamente a través de la rapidez en la elaboración del proyecto y en la tramitación del correspondiente expediente de contratación, y sobre todo en la celeridad de la ejecución; siendo, además, muy escasa en general la economía del tiempo que en los supuestos normales puede obtenerse mediante el empleo de este sistema con relación a los de publicidad y concurrencia general, sobre todo en su modalidad de tramitación urgente regulada en el art. 26 de la Ley de Contratos. Por lo que se insiste en la necesidad de evitar la utilización del repetido sistema de contratación directa por esta causa, mediante una adecuada previsión de las necesidades a las que atiende el contrato y por una rápida tramitación del expediente de contratación, además de por aquella celeridad en la ejecución.

Finalmente, en cuanto a la **ejecución de los contratos**, debe evitarse la proliferación de modificaciones de los proyectos primitivos, mediante un profundo estudio en su fase de proyección de las necesidades a las que atiende el contrato y de los medios técnicos adecuados para satisfacerlas; ya que aquellas modificaciones, además de alterar las condiciones originarias sobre las que se promovió la concurrencia en el contrato inicial, ocasionan normalmente gastos adicionales y paralizaciones y retrasos en la ejecución, con la consiguiente merma en la eficiencia y eficacia en el empleo de los fondos públicos. De igual modo debe insistirse en la necesidad de realizar las investigaciones a las que se refiere el art. 154 del Reglamento General de Contratación, para los casos en los que se hiciera precisa la modificación de un proyecto y existieran indicios de que ello se debe a defecto o imprevisión de sus autores o supervisores; investigaciones de las que no se ha tenido noticia en este Tribunal en el ejercicio examinado ni en los anteriores.

Con relación a las denominadas obras "accesorias o complementarias" a otras anteriores, debe interpretarse restrictivamente su concepto a fin de no incluir entre ellas a obras que, por su naturaleza, debieran considerarse como de ampliación o de reforma de otras primitivas; ya que en ocasiones dicho concepto se utiliza cuando por sucesivas modificaciones se están alcanzando los límites establecidos como causa de resolución del contrato.

Universidades del ámbito de competencias del Estado

En este apartado del Informe se analizan las cuentas de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y las del resto de Universidades públicas que figuran como competencia de la Administración del Estado en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales, al no haber asumido las Comunidades Autónomas en las que se ubican las competencias previstas en la Ley de Reforma Universitaria (LRU).

Las Universidades son Entes de derecho público, cuyas cuentas se rinden directamente al Tribunal y no se integran en la Cuenta General del Estado.

En general, las Universidades no han respetado los plazos de rendición de cuentas establecidos en el art. 35.2 de la LFTCu , siendo especialmente destacables los retrasos de las Universidades Politécnica de Madrid, Castilla-La Mancha y León. Estos retrasos constituyen la causa de que en este Informe del ejercicio 1990, no se haya podido incluir los resultados de la fiscalización correspondientes a las Universidades y período citados. Por el contrario, se recogen los de la fiscalización de las cuentas de 1989 de las Universidades Complutense de Madrid y León, que no fueron integrados en el Informe del correspondiente ejercicio, al haber sido rendidas con una demora cercana a los dos años.

Respecto a la estructura de las cuentas rendidas, destaca su heterogeneidad. Así, en 1990, existe todavía un número considerable de Universidades que no presentan sus estados bajo principios de contabilidad financiera y patrimonial, lo que evidencia la necesidad de formular un sistema contable uniforme que haga realidad el objetivo de normalización que la LRU impone.

El examen de los estados financieros pone de manifiesto salvedades que afectan tanto a la presentación como a la correcta representación de dichos estados respecto a la liquidación de sus presupuestos y, en su caso, de su situación financiera y patrimonial.

Del análisis de la ejecución de los presupuestos de gastos se deduce el elevado volumen de modificaciones de crédito, especialmente en el capítulo de inversiones reales, en el que el importe de las modificaciones supera el 85% de los créditos iniciales. Ello unido a la existencia de importantes desviaciones en la ejecución de los créditos definitivos, permite concluir que los presupuestos de las Universidades no se elaboran, en general, con el rigor adecuado.

La realización de los presupuestos de ingresos se ajusta, con pequeñas desviaciones en defecto, a las previsiones efectuadas. Del conjunto de derechos reconocidos, las transferencias corrientes y de capital suponen la partida más significativa con porcentajes superiores al 77% del total ingresos del período analizado, figurando a continuación las tasas con una participación relativa en torno al 22%.

SEGURIDAD SOCIAL

- La liquidación del presupuesto de la Seguridad Social del ejercicio de 1990, refleja un total de recursos realizados de 6,77 billones de pesetas, lo que supone un incremento del 4,9% sobre la cifra presupuestada y un 14,3% en relación con la del año anterior. Del citado importe 4,55 billones (el 67,2%) proceden de cotizaciones sociales y 2,05 billones (el 30,3%) corresponden a la aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social.

En el área de los gastos las obligaciones reconocidas ascendieron a 6,75 billones de pesetas, importe que representa el 98,2% del presupuesto definitivo del ejercicio y una tasa de incremento respecto a 1989 del 15,1%. Las prestaciones económicas con 4,28 billones (el 63,5% del total) constituyen la rúbrica de gasto más importante, seguida de la asistencia sanitaria con 2,06 billones (el 30,6% del total) y de los servicios sociales con 0,18 billones (el 2,7% del total), funciones estas dos últimas en las que la gestión transferida a las Comunidades Autónomas ha significado en términos relativos el 50,7% y el 24,2%, respectivamente, de los gastos totales realizados.

- El contenido de las cuentas rendidas del ejercicio de 1990 ha supuesto un avance significativo respecto al de años anteriores, tanto en cantidad como en calidad, de la información recibida en el Tribunal. El progreso más notable a este respecto se ha experimentado en relación con la superación de deficiencias que venían apreciándose en los balances de situación, y ello como consecuencia de la información complementaria facilitada a este Tribunal como consecuencia de las actuaciones de carácter extraordinario llevadas a cabo por la Seguridad Social en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de fecha 12 de mayo de 1992 (B.O.E. de 29 de mayo). Estas actuaciones han permitido esclarecer la situación real de determinadas masas patrimoniales y la planificación de tareas de actualización de datos, de realización de ajustes y de conciliaciones de saldos que están en fase de ejecución.

- En el análisis de la gestión económica y por lo que respecta a la ejecución y desarrollo presupuestarios, hay que observar, al igual que en Informes anteriores, la existencia de remanentes ficticios derivados del procedimiento de tramitación de determinadas modificaciones crediticias, una presentación incompleta de la liquidación del presupuesto por programas. De otra parte, también hay que poner de manifiesto que, al igual que en ejercicios anteriores, en 1990 se han realizado gastos sin cobertura presupuestaria.

- Por lo que se refiere a los resultados que lucen en las cuentas de la Seguridad Social de 1990 hay que significar que el superávit por operaciones presupuestarias que vienen reflejando las mismas desde 1985 está cuestionado por los gastos realizados sin cobertura presupuestaria a los que antes se ha hecho referencia, formalizados en la contabilidad financiera en rúbricas de activo de carácter transitorio, así como por la contracción de obligaciones, sin reflejo contable alguno, que han exigido para su atención la concesión de créditos extraordinarios, entre los que destaca el autorizado por el Real Decreto Ley 6/1992 de 13 de noviembre por importe de 280.558 millones de pesetas.

- Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales han rendido las cuentas del ejercicio de 1990 aportando más información complementaria que en ejercicios

anteriores, si bien hay que señalar la existencia de carencias trascendentes en materias de inventarios.

Como en años anteriores, del análisis de la información recibida en el Tribunal se desprende la realización de gastos de administración por encima del límite legal establecido, práctica irregular que repercute en el presupuesto de la Seguridad Social que soporta el gasto correspondiente a los excesos producidos.

La cuenta de liquidación del presupuesto agregado de estas Entidades refleja un total de recursos realizados por valor de 348.001 millones de pesetas y un montante de obligaciones reconocidas que asciende a 348.003 millones, cifras que en ambos casos representan el 5% de las del Sistema de la Seguridad Social. La información aportada sobre el desarrollo del presupuesto es también incompleta (falta la Memoria de ejecución del presupuesto en el 26% de las Mutuas y parte de los expedientes de modificaciones presupuestarias de este) y pone de manifiesto la tramitación extemporánea (Junio de 1991) de expedientes de ampliaciones de crédito, lo que revela la realización de gastos al margen de la disciplina presupuestaria.

- En el ejercicio de 1990 ha proseguido la tramitación de expedientes de depuración por la Comisión para el estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social. Relativos a dicho ejercicio se han recibido y examinado 443 expedientes por un valor total de 34.798 millones de pesetas, de los que 20.051 millones corresponden a saldos deudores y 14.747 millones a saldos acreedores.

Con la fiscalización de los referidos expedientes se ha completado la de todos los tramitados por la referida Comisión desde el comienzo de sus actuaciones (2.798 expedientes). Su valor total asciende a 156.980 millones de pesetas, 98.516 millones de saldos deudores y 58.464 millones de saldos acreedores.

- En el análisis de la contratación administrativa se han observado, como circunstancias más destacables, las que a continuación se expresan:

La contratación de obras ha experimentado un notable incremento con respecto a 1989, habiéndose detectado un importante aumento del sistema de adjudicación mediante concurso, en consonancia con la reforma de la legislación de contratos que entró en vigor a mediados de 1990.

Los contratos de servicios han experimentado un incremento numérico respecto a 1989, si bien el volumen de gasto ha disminuido. En estos contratos se ha detectado un aumento del sistema de adjudicación directa, especialmente en lo que se refiere a los contratos de asistencia para el mantenimiento, desarrollo y soporte de los equipos informáticos y sus programas, así como para la formación del personal.

La contratación de suministros ha disminuido respecto a 1989, tanto en el número de contratos como en el volumen contratado. La modalidad de adjudicación directa, que sigue siendo la más utilizada, ha aumentado de manera significativa (un 71%) en el INSALUD.

SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

Comunidades Autónomas

Las Cuentas Generales de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las deficiencias que se indican en el apartado I.4, han sido rendidas fuera de plazo en Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia y Región de Murcia. No consta el plazo de rendición en el informe elaborado por su Organo de Control Externo en la Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. Las cuentas de las Empresas públicas se han rendido con las consideraciones que se indican también en el apartado I.4.

Los presupuestos de las Administraciones Generales de las Comunidades Autónomas, con excepción de Extremadura, se liquidan funcionalmente, en analogía con las técnicas de presupuestación del Estado.

Las modificaciones netas de los créditos aprobados por las respectivas Asambleas Legislativas, han supuesto 0,9 billones de pesetas (Administraciones Generales) que implican un aumento del 19% sobre las iniciales. Por otro lado, las transferencias de crédito han representado un 5% de dichos créditos.

Los sistemas contables implantados en las Comunidades Autónomas continúan respondiendo al modelo de contabilidad presupuestaria de partida simple, con las excepciones de Navarra y C. Valenciana que establecieron la contabilidad por partida doble en los ejercicios anteriores. No obstante esta última no presenta balance de situación ni la cuenta de resultados.

Se recomienda que se extienda a todas las Comunidades la aplicación de un plan de contabilidad adaptado al General del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 125 de la Ley General Presupuestaria, y permitir normalizar los datos ofrecidos por la contabilidad de los diversos agentes del sector público, de forma que sean comparables y agregables.

El gasto de las Comunidades, en términos de obligaciones reconocidas, ha ascendido a la cifra de 5 billones de pesetas (Administración General) con un incremento del 21% respecto del ejercicio anterior, destacando la elevada cuantía de las operaciones corrientes, que representan un 71% del total. Las Comunidades Autónomas que superan esta media en esta categoría de gastos son Andalucía, Cataluña, País Vasco y C. Valenciana. Es de señalar la importancia relativa del cap. 4 "Transferencias corrientes" con un 45% de participación, que manifiesta la primacía de la actividad subvencionadora de las Comunidades Autónomas frente a la inversión real que sólo representa un 14% del total.

Los derechos reconocidos durante el ejercicio, según las cuentas de liquidación de las Administraciones Generales, se han elevado a 5 billones de pesetas con un aumento del 20% sobre los del ejercicio anterior, siendo el cap. 4 "Transferencias corrientes" (que alcanza un 62% del total) el de mayor peso específico. En relación con las Comunidades en Régimen Común (es decir, sin incluir la Foral de Navarra y el País Vasco), considerando los derechos reconocidos, la financiación básica ("Participación en los ingresos del Estado", "Tributos cedidos", "Tasas", y "Transferencias de la Seguridad Social") constituye el 62% de los recursos, seguida de la financiación complementaria que participa en un 14% de los mismos.

Cabe destacar a este respecto que en las fiscalizaciones realizadas se detecta un exceso de contraídos de derechos por un importe de 248.968 millones de pesetas.

El grado de ejecución de los presupuestos de gastos ha sido del 89%, siendo los índices más bajos los de Aragón, Extremadura y Castilla y León. Los ingresos se han efectuado en un 99%, siendo los índices más bajos los de Extremadura y Cantabria.

Los resultados de las operaciones no financieras presentan un déficit conjunto de 349.335 millones de pesetas, destacando los de Cantabria, Región de Murcia, La Rioja y Madrid.

Los avales experimentan un incremento durante el ejercicio del 1%, con respecto al ejercicio anterior, si bien existen numerosas limitaciones como consecuencia de la falta de documentación (Extremadura), o de información en los Informes elaborados por los Organos de Control Externo (Andalucía, Navarra y País Vasco). No se observa, por regla general, un mejor seguimiento de los mismos.

El endeudamiento de las Comunidades Autónomas a fin de ejercicio se aproxima a los 0,86 billones de pesetas, con un aumento respecto al año anterior de 0,26 billones de pesetas. En 1990 sigue la tendencia del ejercicio anterior de incrementar esta fuente de financiación, así como el abandono paulatino de las emisiones de deuda pública y su sustitución por la obtención de créditos y préstamos, fundamentalmente de instituciones privadas. Es de señalar que en la mayoría de las Comunidades, el reconocimiento de los derechos se realiza en la fecha de emisión del empréstito o de la formalización del contrato y no en el momento en que son exigibles o se produce su ingreso en la tesorería.

La carga financiera, correspondiente a este endeudamiento por inversiones es del 3%, muy por debajo del límite establecido en el art. 14.2.b de la LOFCA. Este índice no ha variado con respecto al ejercicio anterior a pesar del fuerte incremento experimentado en el endeudamiento (44%).

El remanente de tesorería conjunto de las Comunidades, que según los datos contables, asciende a 371.578 millones de pesetas, se convierte en un importe negativo de 60.549 millones, debido a los ajustes detectados por este Tribunal por el criterio incorrecto de reconocer las operaciones de endeudamiento. Estos remanentes negativos destacan sobre todo en Cataluña y Andalucía y pueden incidir negativamente en la capacidad financiera para realizar las incorporaciones de crédito y otras modificaciones en el presupuesto del ejercicio siguiente.

Corporaciones Locales

Es relevante señalar el incumplimiento, en el plazo legalmente establecido, de la obligación de rendición de las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas por parte de 113 Corporaciones con población superior a 5.000 habitantes. En este mismo supuesto incurren 2.033 municipios con población inferior a los 5.000 habitantes.

Se han analizado la composición y la estructura de algunas magnitudes presupuestarias, obtenidas de la agregación de las liquidaciones del presupuesto refundido de las Corporaciones Locales, clasificando esta información por Comunidades Autónomas, a efectos de una mejor comparabilidad de las mismas.

Como resultado del examen y comprobación de las cuentas anuales, se han observado determinadas prácticas irregulares entre las que han de señalarse, como más importantes, la falta de cumplimiento del principio de nivelación presupuestaria, la

financiación insuficiente de las modificaciones anuales de crédito, la falta de reflejo adecuado en las cuentas de Administración del Patrimonio y la aplicación en esta cuenta de criterios contables distintos a los empleados en la cuenta de Presupuesto, la contabilización en la cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto de ingresos por subvenciones que deberían recogerse en la de Presupuesto, así como la existencia de valores pendientes de cobro con antigüedad superior a los cinco años, sobre los que no se han realizado ningún tipo de depuración o comprobación sobre la posibilidad de su realización.

En lo que se refiere a la contratación local, es de señalar que ocho Corporaciones no han remitido al Tribunal de Cuentas 29 expedientes de contratación que les han sido requeridos de manera individualizada. Por otra parte, el examen de los expedientes contractuales ha puesto de manifiesto que la ejecución de obras públicas ocupa el primer lugar en la finalidad de la contratación local, así como que la forma de contratación directa es la más utilizada. En cuanto a las irregularidades más importantes en que han incurrido las Corporaciones Locales en materia contractual, caben señalar las que se refieren a la falta de definición del objeto de los contratos, a las deficiencias en la selección de las empresas adjudicatarias y a las anomalías en la recepción del objeto del contrato, donde se incluye también el incumplimiento, en cuanto a plazos de entrega estipulados, de los bienes o de la prestación de los servicios convenidos.

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

Por lo que se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial y dadas las características específicas de este apartado del Informe, las observaciones más importantes se encuentran recogidas en el propio apartado.

SECTOR PUBLICO ESTATAL

I. Cuenta General del Estado: Regularidad Financiera y Contable

ÍNDICE

I.1 ASPECTOS GENERALES
- I.1.1. Estructura, contenido y presentación
- I.1.2. Homogeneidad y consistencia interna de los datos contenidos en las distintas partes de la CGE
- I.1.3. Modificaciones presupuestarias

I.2 CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
- I.2.1. Liquidación de presupuestos
- I.2.2. Balance de situación integral
- I.2.3. Resultados

I.3 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
- I.3.1. Liquidación de los presupuestos
- I.3.2. Balances de situación
- I.3.3. Resultados

I.4 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS
- I.4.1. Liquidación de los presupuestos
- I.4.2. Balances de situación
- I.4.3. Resultados

I.5. APARTADO ADICIONAL. CUENTAS NO INCLUIDAS EN ESTADOS AGREGADOS
- I.5.1. Organismos no incluidos en los estados agregados del ejercicio 1989
- I.5.2. Organismos no incluidos en los estados agregados del ejercicio 1989 y anteriores

I.- CUENTA GENERAL DEL ESTADO: REGULARIDAD FINANCIERA Y CONTABLE (FUNDAMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN DEFINITIVA).

En este apartado del Informe anual se recogen los resultados obtenidos del examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (en adelante CGE)[1] correspondiente a 1990, relativos a los aspectos de regularidad financiera y contable que, como tales, constituyen el fundamento y desarrollo de la Declaración definitiva prevista en el art. 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (LOTCu).

De acuerdo con las disposiciones aplicables, especialmente el art. 10 de la LOTCu y 33 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (en adelante LFTCu), se han establecido como objetivos generales del examen y comprobación de la CGE, los siguientes:

a) Determinar si la CGE se ha presentado de conformidad con las normas que le son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido.

b) Comprobar si la CGE es coherente en relación a las distintas partes que la integran, a los datos contenidos en la del ejercicio anterior, y a la documentación complementaria y cuentas parciales que le sirven de fundamento.

c) Comprobar, asimismo, si los estados financieros que constituyen la CGE se ajustan a los principios que informan la contabilidad pública, y en consecuencia, si puede considerarse que expresan razonablemente la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial a que se refieren.

d) Valorar el cumplimiento de las normas presupuestarias y contables.

En el marco de estos objetivos, las líneas directrices que informan el trabajo de fiscalización, y por tanto la presentación de los resultados, son las siguientes:

- La CGE se considera, a efectos de su examen y comprobación, como un documento unitario que, ante todo, debe ser consistente respecto a la información de las distintas Entidades públicas cuyas cuentas están integradas en aquélla; de ahí que se insista especialmente en los casos de falta de homogeneidad en la contabilización de las mismas operaciones y de aplicación de principios o criterios contables no uniformes.

- La revisión de la CGE se realiza bajo la premisa de que debe ser imagen fiel de la realidad económica a la que se refiere, por lo que se investigan especialmente las desviaciones observadas en la aplicación de los principios contables y su incidencia en la exactitud de las cifras presentadas en cuentas, particularmente de los resultados de gestión presupuestaria, con vistas a determinar, en su caso, los gastos e ingresos del Estado y de sus Organismos autónomos pendientes de regularizar. Con ello, se intenta comprobar si los datos contenidos en la CGE derivan objetivamente de las operaciones realmente efectuadas y no existen acciones u omisiones contables que los desvirtúen.

- El presente Informe sobre la CGE pretende poner de manifiesto las anomalías observadas en las cuentas, con independencia de que tales anomalías deriven de actuaciones propias de la entidad a que corresponden dichas cuentas o de otros Órganos de la Administración. Por ello la mención en el Informe de determinados Organismos u otras Unidades administrativas no implica en todos los casos una crítica a su actuación específica.

Para la consecución de los objetivos anteriormente señalados, se han aplicado los procedimientos generales establecidos en el art. 33 de la LFTCu, cuyos resultados se exponen a continuación, distinguiendo cuatro apartados principales y un apartado adicional, referidos, el primero, a los aspectos generales de la CGE; el segundo, a la Cuenta de la Administración General del Estado; el tercero, a las cuentas de los Organismos autónomos administrativos; el cuarto, a las cuentas de los Organismos autónomos comerciales, industriales y financieros; y el apartado quinto y adicional, a los Organismos cuyas cuentas no se han integrado en los estados anuales agregados.

---

[1] La CGE viene regulada, entre otros, por los arts. 132, 133, 135 y 136 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (TRLGP), modificados en su redacción inicial por la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

De acuerdo con el art. 132.1 la CGE se forma con la Cuenta de la Administración General del Estado, las de los Organismos autónomos administrativos (OAA), y las de los Organismos autónomos comerciales, industriales y financieros (OACIF).

El art. 133 establece el contenido básico de la Cuenta de la Administración General del Estado, cuya estructura y desarrollo se determina en la Orden de 28 de julio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de la Central Contable.

El art. 136, además de señalar los plazos para la formación y remisión al Tribunal de Cuentas de la CGE, faculta a la Intervención General de la Administración del Estado a que pueda formar aquélla, aun cuando falten por rendir o se rindan con graves defectos las cuentas de alguno o algunos Organismos, siempre que tales omisiones o defectos no impidan la elaboración de los estados anuales agregados a que se refiere el art. 135, que exige que dichos estados permitan ofrecer una visión general de la gestión realizada en cada ejercicio por el conjunto de los Organismos autónomos.

I.1.- ASPECTOS GENERALES.

I.1.1.- ESTRUCTURA, CONTENIDO Y PRESENTACIÓN.

La CGE correspondiente al ejercicio 1990 presenta la estructura y contenido establecidos en las disposiciones que le son de aplicación, si bien la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no ha incluido en los estados anuales agregados las cuentas de los Organismos que se citan a continuación, por las razones que asimismo se indican, puestas de manifiesto por dicho Centro directivo:

1) Administrativos.

- Agencia Española de Cooperación Internacional, por no estar conforme la cuenta de 1989 ni haberse presentado la de 1990 a la fecha de elaboración de los estados anuales agregados.

- Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, por no haberse recibido los estados y anexos a la citada fecha.

- Mutualidad General Judicial y Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por no estar solventadas las deficiencias puestas de manifiesto por la IGAE en relación con las cuentas de estos Organismos.

- Centro de Arte Reina Sofía, Centro de Investigaciones Sociológicas y Escuela Nacional de Sanidad, ya que a pesar de su creación en 1990 no tienen presupuesto aprobado para dicho año.

2) Comerciales, industriales y financieros.

- Patronato de Casas Militares, Patronato de Casas del Aire, Junta del Puerto de Melilla, Junta del Puerto de Pasajes, Junta del Puerto de Tarragona, Junta del Puerto de Santander y Confederación Hidrográfica del Duero, por no haber podido entrar la IGAE en su examen, al encontrarse aún sin solventar los defectos de que adolecían las cuentas de liquidación de ejercicios anteriores.

- Agencia Nacional del Tabaco, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Administración Turística Española e Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por no haberse recibido las cuentas del ejercicio hasta la fecha de elaboración de los estados anuales agregados.

- Escuela de Organización Industrial, por adolecer de defectos formales que impiden su inclusión en los presentes estados agregados.

- Trabajos Penitenciarios, Junta del Puerto de Algeciras y Junta del Puerto de Alicante, por no haber rendido las cuentas del ejercicio 1990 además de no haber solventado aún los defectos de que adolecían las cuentas de ejercicios anteriores.

Los Organismos no incluidos en los estados anuales agregados suponen sobre el total, en número, un 10,8% en los OAA (4 sobre 37) sin tener en cuenta los 3 Organismos que no contaban con presupuesto en el ejercicio, como se hizo referencia con anterioridad, y la OTP que tampoco cuenta con presupuesto realizando únicamente operaciones de ejercicios cerrados, y un 22% en los OACIF (15 sobre 68), representando sus créditos iniciales sobre el conjunto de los aprobados para cada subsector un 1,3% para los primeros y un 6,8% para los segundos. Si las cuentas de los 7 Organismos -IRYDA, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, Fondo de Explotación de Servicios de la Cría Caballar y Remonta, Gerencia de Infraestructura de la Defensa, Servicio de Vigilancia Aduanera, Agencia del Aceite de Oliva y Confederación Hidrográfica del Norte de España-, a los que se hace referencia como no agregables en la parte introductoria de los apartados I.3 y I.4, no se hubiesen integrado en los estados anuales agregados como procedía -dados los defectos que presentan- los porcentajes referidos pasarían a ser un 27% y un 23,5% en número y un 9,5% y un 7% en créditos iniciales, de los OAA y OACIF, respectivamente.*

Con posterioridad a la remisión de los estados anuales agregados se han recibido las cuentas de varios de estos Organismos revisadas de conformidad por la Intervención General del Estado, a las que se dedica el apartado I.5 posterior.

Por otra parte, no se ha comunicado a este Tribunal la existencia de expedientes administrativos para exigir, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de "no rendir las cuentas reglamentarias exigidas o presentarlas con graves defectos" (art. 141.1.e) del TRLGP), de lo que puede inferirse, a tenor de lo establecido en el art. 41.1 de la LOTCu, que no han sido incoados.

Los datos relativos a los Organismos expresados anteriormente no están incluidos, lógicamente, en los cuadros anexos, puesto que han sido elaborados por este Tribunal a partir de las cuentas integradas en los estados anuales agregados.

La CGE relativa al ejercicio 1990 se ha rendido a este Tribunal con una demora de 21 días sobre el plazo legalmente establecido.

I.1.2.- HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LAS DISTINTAS PARTES DE LA CGE.

La información de los estados de liquidación presupuestaria integrados en la CGE es, en general, homogénea. Respecto a su consistencia interna, sigue produciéndose en el ejercicio examinado la falta de concordancia entre los datos aportados en las cuentas por las Entidades pagadoras y perceptoras correspondientes a operaciones de transferencia entre ellas, reiteradamente puesta de manifiesto por este Tribunal año tras año.

De acuerdo con lo solicitado en las alegaciones, se hace constar que junto con los estados agregados de Organismos autónomos del ejercicio 1991, se ha presentado un "estado de conciliación" de las discrepancias habidas en 1991.

En los anexos I-1.3.1 y I-1.3.2 pueden observarse las diferencias que aparecen tanto en los flujos anuales de 1990 como en los saldos en 31/12/90, entre las obligaciones y los recíprocos derechos contraídos por transferencias entre los tres subsectores integrados en la CGE.

La diferencia global, considerando la CGE como un todo unitario, entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por dichas transferencias (1.184.677 millones de pesetas) y los correlativos derechos (1.189.013 millones de pesetas) asciende a 4.336 millones de pesetas, cifra que resulta de la compensación del conjunto de diferencias positivas y negativas desagregadas por Entidades, que ascienden a 6.901 y 11.237 millones de pesetas, respectivamente.

En el mismo sentido, la diferencia global entre obligaciones contraídas pendientes de pago en 31/12/90 (261.490 millones) y los correlativos derechos pendientes de cobro (217.162 millones), se eleva a 44.328 millones de pesetas, resultado de la compensación de diferencias positivas y negativas, con el mismo nivel de desagregación antes indicado, por importes de 54.097 y 9.769 millones de pesetas, respectivamente.

Según se deduce de los citados anexos, las discrepancias más importantes en los datos contables relativos a gastos-ingresos y créditos-débitos, suministrados por los distintos Agentes pagadores y receptores de transferencias agrupados en los tres subsectores que integran la CGE, son las siguientes:

a) Entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por los OAA a favor del Estado por transferencias corrientes y los derechos recíprocos contraídos por éste (-889 millones de pesetas).

El citado importe es el resultado de varias diferencias de distinto signo en una serie de Organismos por importes netos de 500 millones de pesetas positivos y 1.389 millones de pesetas negativos. Los 500 millones de pesetas corresponden a transferencias reconocidas y pagadas por el Registro de la Propiedad Industrial al Estado al final de 1990 que éste recibe y contrae en el ejercicio 1991. En la composición de la segunda cifra destacan los importes de 1.296 millones que corresponden a obligaciones reconocidas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en el ejercicio 1989 que el Estado contrae en 1990, y de 303 millones que este mismo Organismo reconoce en el artículo 48 "A familias e Instituciones sin fines de lucro", compensados por otras pequeñas diferencias de sentido contrario.

b) Entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por los OACIF a favor del Estado por transferencias corrientes y los derechos recíprocos contraídos por éste (4.269 millones de pesetas).

Esta diferencia se produce, básicamente, por la utilización del criterio de caja por el Estado, que imputa como ingresos del ejercicio 2.525 y 448 millones de pesetas que el Organismo Nacional de Loterías (ONLAE) y el Consorcio de Compensación de Seguros contraen en 1989 y, por el contrario, deja de aplicar 6.001 y 1.288 millones del ONLAE y la Caja Postal de Ahorros recogidos en las cuentas de estos Organismos correspondientes a 1990[7].

c) Entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por los OAA a favor del Estado por transferencias de capital y los derechos recíprocos contraídos por éste (-110 millones de pesetas).

Esta discrepancia es consecuencia, principalmente, de la aplicación al artículo 73 "Transferencias de capital de OACIF" del presupuesto del Estado de transferencias corrientes recibidas del INEM, por importe de 73 millones, así como del reconocimiento de obligaciones por parte del IRYDA de 33 millones de pesetas en su capítulo 6 "Inversiones reales", que el Estado contabiliza como transferencias recibidas.

d) Entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por el Estado a favor de los OAA por transferencias corrientes y los derechos recíprocos contraídos por éstos (-1.550 millones de pesetas).

El anterior importe se compone de varias diferencias positivas y negativas por cuantías respectivas de 186 y 1.736 millones. Entre las primeras destacan 127 millones que la Escuela de Hacienda Pública contabiliza como transferencias de capital. Entre las segundas los dos importes más significativos corresponden al Centro de Gestión Catastral (886 millones), y al Instituto Nacional de Estadística (810 millones) y se deben a la excesiva contracción de derechos por parte de estos Organismos, al considerar como ingresos, remanentes de crédito anulados por el Estado.

e) Entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por el Estado a favor de los OAA por transferencias de capital y los derechos recíprocos contraídos por éstos (-4.815 millones de pesetas).

De los 4.815 millones la mayor parte corresponde al exceso de contracción de derechos por parte del Centro de Gestión Catastral (4.567 millones) y del Instituto Nacional de Estadística (650 millones) por similar causa a la referida en el apartado anterior, compensados por la aplicación al capítulo 6 del presupuesto de ingresos de la Gerencia de Infraestructura de Defensa de 584

[7] Los ingresos procedentes del ONLAE lo son en formalización desde las correspondientes cuentas de acreedores no presupuestarios, de acuerdo con las comunicaciones del Organismo a la Dirección General del Tesoro.

millones transferidos por el Estado, y 127 millones que la Escuela de Hacienda Pública contabiliza como transferencias de capital cuando se trata de transferencias corrientes.

f) Entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por el Estado a favor de los OACIF por transferencias corrientes y los derechos recíprocos contraídos por éstos (-615 millones de pesetas).

Esta diferencia se deriva, principalmente, de la contracción de derechos por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (253 millones) y del Instituto de la Juventud (199 millones), que corresponden a remanentes de crédito anulados por el Estado.

g) Entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por el Estado a favor de los OACIF por transferencias de capital y los derechos recíprocos contraídos por éstos (-500 millones de pesetas).

Esta discrepancia se produce, casi en su totalidad, por la incorrecta aplicación en la contabilidad de los Organismos como transferencias de capital de determinados ingresos aplicables en otros artículos de su presupuesto de ingresos.

h) Entre las obligaciones pendientes de pago en 31/12/90 por transferencias corrientes de los OACIF a favor del Estado y los derechos recíprocos pendientes de cobro por éste (1.602 millones de pesetas).

La diferencia es consecuencia de la existencia de obligaciones pendientes de pago por 1.288 y 314 millones en la Caja Postal de Ahorros y en el ONLAE, respectivamente, que no tienen en el Estado reflejo contable alguno, al utilizar éste el criterio de caja.

i) Entre las obligaciones pendientes de pago en 31/12/90 por transferencias de capital de los OAA a favor del Estado y los derechos recíprocos pendientes de cobro por éste (50.000 millones de pesetas).

La falta de registro en la contabilidad del Estado como derechos reconocidos de 50.000 millones de pesetas contraídos en 1987 como obligaciones por el INEM[1] y que a 31/12/90 se encuentran pendientes de pago, constituye la causa de la diferencia reflejada en este apartado.

j) Entre las obligaciones pendientes de pago en 31/12/90 por transferencias corrientes del Estado a favor de los OAA y los derechos recíprocos pendientes de cobro por éstos (-356 millones de pesetas).

Esta discrepancia es el resultado de la compensación de diferencias en varios Organismos por importes netos de 1.757 millones de pesetas positivos y 2.113 millones de pesetas negativos. Los 1.757 millones corresponden a la existencia en las cuentas del Estado como pendientes de pago en 31/12/90 de partidas con destino al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo procedentes del ejercicio anterior que éste recoge en el capítulo 3 de su presupuesto de ingresos. Respecto a los 2.113 millones, su mayor parte se debe a las razones aludidas en el segundo inciso del párrafo explicativo de la diferencia d), así como al criterio contable que sigue el Instituto Social de las Fuerzas Armadas al reconocer derechos por importe de 211 millones para subvencionar los déficit en 1990 de dos Mutualidades integradas en el Organismo, cuando el Estado reconoce la obligación en el ejercicio siguiente.

k) Entre las obligaciones pendientes de pago en 31/12/90 por transferencias corrientes del Estado a favor de los OACIF y los derechos recíprocos pendientes de cobro por éstos (-1.150 millones de pesetas).

De los 1.150 millones referidos la mayor parte se deriva de la diferencia ya comentada en el apartado f) respecto al ejercicio corriente, así como del mantenimiento de derechos contraídos en exceso en ejercicios anteriores por el FORPPA (292 millones) y el Instituto de Salud Carlos III (115 millones).*

l) Entre las obligaciones pendientes de pago en 31/12/90 por transferencias de capital del Estado a favor de los OAA y los derechos recíprocos pendientes de cobro por éstos (-5.409 millones de pesetas).

m) Entre las obligaciones pendientes de pago en 31/12/90 por transferencias de capital del Estado a favor de los OACIF y los derechos recíprocos pendientes de cobro por éstos (-212 millones de pesetas).

Las diferencias anteriores son, en su mayor parte, consecuencia de la contracción de derechos por mayor cuantía que las obligaciones contabilizadas por el Estado en varios Organismos.

A los casos específicos de discrepancias contables expuestos podrían añadirse otra serie de ellos de menor importancia cuantitativa. Unos y otros se producen fundamentalmente, al margen de los casos originados por los normales desfases temporales entre pagos y cobros, por las siguientes causas:

1) La deficiente información entre las Entidades, que permite la contracción de obligaciones por los pagadores sin que tengan conocimiento de las mismas los perceptores, y viceversa, unida a cierta indefinición normativa sobre la cuantía y el momento en que nace la obligación de pago, y por tanto, el recíproco derecho de cobro.

2) La incorrecta clasificación contable de estas obligaciones o derechos por algunas Entidades dado que se contabilizan en conceptos extrapresupuestarios o rúbricas presupuestarias que no les corresponden, sea atendiendo a la naturaleza económica de las operaciones o jurídica de los Organismos que intervienen en ellas.

3) La aplicación por las Entidades perceptoras o pagadoras del principio contable de caja en la contracción de los derechos u obligaciones, cuando las correlativas Entidades pagadoras o perceptoras utilizan el de devengo como resulta procedente. Tiene una particular incidencia a este respecto la utilización en la contabilidad del Estado del mencionado principio de caja en la contracción de derechos por transferencias; como puede observarse en el anexo I-1.3.2, el Estado, en 31/12/90, no tiene registrado derecho alguno pendiente de cobro frente a los importes de las obligaciones pendientes de pago a su favor que lucen en las cuentas de los Organismos.

La falta de concordancia entre los datos contenidos en las distintas cuentas integrantes de la CGE, puesta de manifiesto en los párrafos anteriores, desvirtúa la información contable, unas veces incrementando o minorando indebidamente los ingresos o gastos y los créditos o débitos, otras introduciendo una incorrecta clasificación de los mismos, con el consiguiente efecto perturbador sobre la veracidad y exactitud de los estados contables que configuran la CGE. Por otra parte, constituye un serio condicionante para abordar con rigor una futura presentación de la CGE en términos consolidados. La cuestión adquiere, de cara al futuro inmediato, una importancia mucho más acusada. Los saldos de las cuentas del sector público, y muy en especial del Estado, pasarán a ser fundamentales en los procesos de acomodación y convergencia que se desarrollen en la Comunidad Europea. Es absolutamente preciso que las cifras españolas tengan un alto nivel de fiabilidad. Todo lo dicho exige que la Administración, continuando la línea de mejora que se observa en relación con la situación de ejercicios anteriores, solucione este problema definitivamente.

Finalmente, se subraya que la corrección de los desajustes contables señalados tendría incidencia en la liquidación presupuestaria, en las cuentas de resultados y en algunas de balance del Estado y de los Organismos afectados por aquéllos. No obstante, por el efecto compensación que se produce entre unos desajustes y otros y por la propia dificultad de conocer en todos los casos, con la información disponible, el sentido exacto de su corrección, estas anomalías se plantean como salvedad general a la CGE, sin perjuicio de que algunas, por su importancia cuantitativa y significación, sean tratadas en los apartados posteriores de este Informe.

I.1.3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

La fiscalización de las modificaciones presupuestarias, que viene ordenada al Tribunal de Cuentas por los artículos 11 de la LOTCu y 43 de la LFTCu, se ha efectuado a través de un doble examen que ha atendido respectivamente a su regularidad financiera y contable y a si su utilización ha sido razonable.

El examen de regularidad se ha realizado a la luz de lo dispuesto en el TRLGP, en el Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria y la Ley 5/1990, de 29 de junio, procedente de aquel, dictados con motivo de la prórroga de los presupuestos del ejercicio 1989, y en la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1.990 (LPGE) así como en las demás normas aplicables, y sus resultados se exponen en este apartado del Informe.

De otra parte, los resultados del examen relativo a la utilización, quedan recogidos en el apartado II.1 "Análisis de las modificaciones de crédito".

El importe de las modificaciones presupuestarias netas del ejercicio según las cuentas rendidas asciende a 3.359.902 millones de pesetas. En el anexo II.1 puede apreciarse en qué medida afectan las expresadas modificaciones a los créditos iniciales en su clasificación económica. Asimismo en el apartado II.1 puede verse la distribución de su importe por figuras modificativas.

Los expedientes de modificación presupuestaria se han revisado agrupándolos por figuras modificativas, con independencia de que afecten al Presupuesto del Estado o a los Presupuestos de los Organismos autónomos, dadas las escasas diferencias en la legislación aplicable a uno y otros y el tenor de los artículos 11 de la LOTCu y 43 de la LFTCu.

No obstante, previamente se exponen algunas observaciones de carácter general o común a las distintas clases de modificación, debiendo destacar que, en parte, son reiteración de otras formuladas en informes anteriores que no han sido atendidas.

I.1.3.1.- Observaciones comunes.

a) Incidencia de la prórroga de los Presupuesto Generales del Estado del ejercicio anterior.

De acuerdo con el art. 134.4 de la Constitución y 56 del TRLGP, al no encontrarse aprobada la LPGE el primer día del año, quedaron automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior, situación que se prolongó hasta la aprobación de dicha Ley. Durante el periodo de prórroga se autorizaron y contabilizaron modificaciones de crédito que en ocasiones respondían a necesidades tenidas en cuenta en la elaboración del Presupuesto definitivo por lo que, una vez aprobado éste, se hizo necesaria su anulación para evitar duplicidades.

[1] El importe de 50.000 millones de pesetas estaba previsto en el artículo 71 del presupuesto de ingresos del Estado así como en el artículo 70 del presupuesto de gastos del INEM cómo transferencia del Organismo al Estado para cofinanciar acciones sociales con el Fondo Social Europeo, en el ejercicio 1987.

Dichas modificaciones anuladas no han sido consideradas en esta fiscalización ni a nivel de expedientes concretos ni en términos globales, ya que en nada afectan a los créditos definitivos del ejercicio.

b) Efectos de la limitación global al reconocimiento de obligaciones.

En el ejercicio 1990 la limitación cuantitativa del gasto público por el Presupuesto ha actuado en un doble frente: respecto a los singulares créditos autorizados, según dispone el art. 60 TRLGP, y de modo global, según el art. 10 de la LPGE[4].

Esta última limitación constituye una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, y según el citado art. 10 consiste en la prohibición de que el conjunto de las obligaciones reconocidas en 1990 en el Presupuesto del Estado supere, con ciertas excepciones, la cuantía total de los créditos iniciales.

La aplicación correcta de dicha limitación implica que los incrementos en ciertas dotaciones presupuestarias deben producir como efecto indisoluble la indisponibilidad de otras dotaciones pero, al no haber ido acompañada de mecanismos contables que asegurasen dicha indisponibilidad, se ha aplicado, de hecho, a la fase de reconocimiento de la obligación y no a la de compromiso de gasto, con lo que ha resultado inoperante en orden a la consecución de los efectos pretendidos.

En la práctica, como se pone de manifiesto en otras partes de este informe, lo que se ha hecho es dejar de contraer en cuentas el exceso de obligaciones generadas en el ejercicio sobre la cifra global autorizada, con el consiguiente deterioro del rigor de la información contable y distorsión del significado de las modificaciones presupuestarias, lo que ha producido el efecto de dejar expedito el camino para adquirir compromisos con cargo a ciertos créditos, sin que quedara garantizada la contracción en cuentas de las respectivas obligaciones y, por tanto, su cumplimiento. Puede afirmarse, en definitiva, que se ha atendido más a la apariencia de la indicada limitación que a su realidad efectiva.

En contestación a las alegaciones debe significarse que del art. 10 LPGE sólo hay dos interpretaciones posibles: o persigue que no se realicen gastos por encima del límite global establecido o persigue simplemente que no se contabilicen los gastos excesivos háyanse o no realizado. La primera interpretación muestra una voluntad de limitar el crecimiento del gasto, la segunda, de ocultarlo. El Tribunal de Cuentas, por razones obvias, ha seguido la primera. Pues bien, si la voluntad del legislador es que no se reconozcan obligaciones, ello supone que no se adquieran aquellos compromisos que legalmente tengan como plazo de ejecución el ejercicio, lo cual ocurre con todos excepto con los de carácter plurianual acogidos al art. 61 TRLGP.

c) Ausencia de reglamentación del TRLGP.

Permanece sin reglamentar el título II de la Ley General Presupuestaria, lo que plantea serios problemas de gestión y control de las modificaciones crediticias. Los arts. 66 y 71 relativos a créditos ampliables y a generación de créditos remiten específicamente a los reglamentos el establecimiento de los requisitos para efectuar modificaciones a través de estos mecanismos. Esta situación obliga a recurrir frecuentemente a disposiciones administrativas fragmentarias e incompletas, de dudosa vigencia en unas ocasiones y en otras de difícil cumplimiento ante el cambio de la realidad administrativa.

d) Insuficiencias de la información contable.

Junto a la insuficiencia normativa indicada, debe señalarse una vez más la de la información contable. La fiscalización de las modificaciones presupuestarias desde la perspectiva de su legalidad ha de girar necesariamente sobre los créditos autorizados, entendiendo por tales las dotaciones o partidas presupuestarias de carácter vinculante. Dichos créditos, a tenor de la vigente legislación presupuestaria, pueden coincidir con artículos o con conceptos o subconceptos. No obstante, la ejecución del presupuesto en las cuentas rendidas al Tribunal viene desagregada en el Estado por conceptos, y en los Organismos autónomos, por artículos. En tanto no se presente la liquidación de los presupuestos desagregada por cada crédito vinculante no será posible, a partir de la información recibida, la comprobación del cumplimiento de algunos condicionantes legales.

I.1.3.2.- Observaciones en relación a las distintas figuras modificativas[5].

a) Ampliaciones de crédito

El TRLGP en su art. 66, configura la ampliación de crédito como una autorización a la Administración para incrementar las dotaciones presupuestarias en función del "reconocimiento de obligaciones específicas del respectivo ejercicio, según disposiciones con rango de Ley". La LPGE ha suprimido estas condiciones, ya que omite las exigencias de que las obligaciones sean específicas del ejercicio y de que tengan origen legal.

Aún si se tiene en cuenta la indicada modificación, no puede considerarse indiferente, desde el punto de vista de la regularidad contable, que el gasto se impute al ejercicio en que se realiza o a otro distinto, pues ello contravendría el principio de anualidad presupuestaria.*

En este orden de cosas se ha puesto de manifiesto la existencia de operaciones de ampliación para satisfacer obligaciones atrasadas que por su cuantía y reiteración no parece tengan por causa inadvertencias o errores de gestión. En esta situación se encuentran al menos 18 expedientes con incrementos presupuestarios por importe de 40.994 millones de pesetas. También aparecen obligaciones nacidas en el ejercicio 1990, que quedan pendientes de reconocimiento y pago para el siguiente en lugar de ampliar el crédito en la medida necesaria para hacerlas efectivas, extremo que en este año se trata de justificar por la limitación al reconocimiento de obligaciones contenidas en el art. 10 de la LPGE, olvidando que el indicado artículo lo que pretende es limitar el gasto público y no impedir, una vez producido, su contabilización. De otra parte se han acordado ampliaciones en determinados créditos en los que, al final de ejercicio, se han anulado importantes remanentes pese a que tanto el TRLGP como la LPGE establecen como límite cuantitativo de la ampliación el importe de las obligaciones que se reconozcan en el ejercicio. Así, en 80 créditos los remanentes anulados (23.308 millones) rebasan el importe de las ampliaciones (12.710 millones); en 18 créditos los remanentes finales (1.107.168 millones) van del 50% al 100% de las ampliaciones (1.276.113 millones), y en 17 créditos, los remanentes anulados (285.509 millones) están comprendidos entre el 25% y el 50% de las ampliaciones (1.111.340 millones). Se trata, según resulta de la información contable, de créditos cuyos incrementos no responden, en todo o en parte, a obligaciones reconocidas, a menos que éstas hubieran quedado sin contraer en cuentas.

A la vista de los hechos expuestos, y teniendo presente que el elenco de créditos ampliables se repite en lo sustancial año tras año, resulta que en la práctica esta facultad administrativa de modificación presupuestaria, en numerosos casos, supone la imputación del gasto no al Presupuesto en que se realiza, sino al del año en que se decide el pago.*

Se dan, en definitiva, un conjunto de circunstancias que revelan que el empleo de la figura de modificación aquí considerada no es el propio (evitar que queden pendientes de pago por falta de crédito determinadas obligaciones cuya cuantía exacta no puede conocerse de antemano) sino que está respondiendo, frecuentemente, a otros fines no previstos en la Ley con la consecuencia de desvirtuar el principio de anualidad.*

Por último, se impone una reflexión sobre el riesgo de que, en las operaciones de ampliación de crédito no suficientemente regladas, se esté produciendo cierta confusión entre las competencias presupuestarias atribuidas por la Constitución a las Cortes Generales y al Gobierno. Los créditos ampliables vienen a amparar a veces gastos cuyo origen y cuantía no deriva directamente de la Ley o de ingresos afectados. Cabe citar, entre otros, los que en ciertos Departamentos tienen por objeto atender obligaciones nacidas de contratos-programa, remuneraciones a agentes mediadores independientes, publicidad y propaganda, y organización y desarrollo de elecciones a órganos de representación de funcionarios. Desde una perspectiva de legalidad el carácter ampliable de estos créditos tiene su cobertura en la Ley de Presupuestos del ejercicio. No obstante, este Tribunal de Cuentas se ve en la obligación de advertir, de conformidad con el art. 13 de su Ley Orgánica, que por esta vía puede quedar despojada de eficacia la reserva de Ley establecida en la Constitución para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y para la contracción de obligaciones financieras (arts. 66.2 y 133.4 de la Constitución), habida cuenta de la habilitación a la Administración para dotar los créditos que dan cobertura a estos gastos, sin que el nacimiento de las respectivas obligaciones derive de una Ley sustantiva ni su importe venga incluido ni limitado por la de Presupuestos. Es cierto que en el art. 10 de la LPGE se ha establecido este año una limitación global al reconocimiento de obligaciones que podría suponer un límite legal al gasto discrecional pero dicho artículo tal como ha sido aplicado por la Administración no ha supuesto un límite a la realización de gastos sino a su contracción en cuentas.*

En relación a las Alegaciones del Gobierno nada que objetar a la defensa que se hace de la constitucionalidad de los créditos ampliables y del art. 66 del TRLGP que los regula. La advertencia del Tribunal de Cuentas parte de la configuración por la Ley de Presupuestos, en forma distinta a como se hace por el TRLGP, de los créditos mencionados en éste párrafo del Informe, los cuales amparan gastos que ni están sujetos a límites presupuestarios propiamente dichos ni derivan de leyes substantivas o de ingresos afectados. De otra parte, el texto del Tribunal de Cuentas no tiene por la propia naturaleza del Informe y del órgano que lo emite, otro carácter que el de ser una mera advertencia para evitar que pueda incurrirse en inconstitucionalidad, lo cual han de procurar todos los poderes públicos. No obstante lo anterior, se introducen ciertas matizaciones en el proyecto de informe remitido a alegaciones a fin de que no ofrezca dudas el sentido de la advertencia formulada.

b) Transferencias

La amplitud con que el ordenamiento presupuestario permite el empleo de la transferencia deja poco margen para el control de legalidad que ha de hacerse más bien desde la perspectiva de la

[4] "El conjunto de las obligaciones reconocidas en 1.990 con cargo al Presupuesto del Estado y referidas a operaciones no financieras excluidas las derivadas de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados por las Cortes, y de las generaciones de crédito financiadas con ingresos previos no podrán superar la cuantía total de los créditos inicialmente aprobados para atender dichas operaciones no financieras en el presupuesto del Estado."

[5] En este ejercicio no se hace mención a la financiación de las modificaciones de crédito en los Organismos autónomos al no haberse detectado incidencias significativas en las mismas.

racionalidad económica y la calidad de la presupuestación. No obstante, las reducidas limitaciones legales que le afectan no siempre se han respetado; pues, al margen de las excepciones admitidas por la Ley, se han efectuado transferencias negativas por un importe de 9.713 millones en créditos previamente incrementados con otras positivas e, inversamente, transferencias positivas por un importe de 10.992 en créditos disminuidos previamente con transferencias negativas.*

Se ha suprimido parte del texto por aceptación de las alegaciones formuladas.

c) Incorporaciones

La facultad de acordar incorporaciones de remanentes de crédito de un ejercicio al siguiente constituye una excepción al principio presupuestario de anualidad que, como toda excepción, debe ser interpretada y aplicada con criterios restrictivos.

Entre los supuestos en que el art. 73 del TRLGP autoriza esta modificación presupuestaria, figuran los créditos extraordinarios, suplementos o transferencias de crédito que, autorizados en el último mes del ejercicio, no hayan podido utilizarse en el mismo, así como los compromisos de gasto contraídos antes del último mes que no hayan podido realizarse. En ambos supuestos, exige la Ley la existencia de causas justificadas para la no utilización o realización dentro del año de vigencia de los créditos.

La práctica administrativa desconoce en no pocas ocasiones estas exigencias. En unos casos se aprueban modificaciones, en las que se fundamentan ulteriores incorporaciones, en fechas en que se carece de tiempo para consumir el crédito. Así se expone frecuentemente en los expedientes. En otros, los créditos se incorporan para atender gastos ya realizados pese a que la ley se refiere a "compromisos que no hayan podido realizarse". Se han detectado acuerdos de modificación por un importe global de 1.117 millones que responden, en todo o en parte, a obligaciones de pago devengadas y no satisfechas y 63 en que no se aduce la causa de la no realización del gasto en el ejercicio precedente.*

La información sobre las incorporaciones que han afectado a gastos ya realizados la ha obtenido el Tribunal de Cuentas de los propios expedientes y ello es independiente de que el gasto esté contabilizado o no. Las razones aducidas en las alegaciones sólo prueban la falta de contabilización. No obstante se rectifican las cifras del Informe remitido a alegaciones, en razón a que resulta dudoso en ciertos casos, a partir de los acuerdos, que los gastos estén realizados.

El tercer supuesto de incorporación previsto en la Ley, remanentes de crédito por operaciones de capital, no presenta problemas de legalidad, habida cuenta de la amplitud con que se configura. No obstante se echa de menos un desarrollo reglamentario que module el recurso a estas alteraciones presupuestarias y que lo delimite del supuesto anterior en los casos en que concurren ambas circunstancias en un mismo expediente, ya que son distintos los órganos competentes para decidir las incorporaciones por operaciones de capital y por compromisos de gasto del ejercicio anterior.

d) Generaciones

La principal dificultad para fiscalizar estas modificaciones, de escasa importancia cuantitativa, deriva de la falta de reglamentación de la LGP ya aludida. En ciertos tipos de ingresos existen disposiciones específicas que delimitan los gastos concretos que pueden ser financiados con aquéllos, pero en otros, al no estar definida de forma previa, se producen los aumentos en créditos sin correlación objetiva con los ingresos.

Esta práctica podría encauzarse si se publicara anualmente en el Boletín Oficial del Estado, la relación de ingresos presupuestos que pueden generar crédito con expresión de los conceptos presupuestarios en los que en cada caso se puede hacer la habilitación según previene el apartado 3.1. de la Orden del Ministerio de Hacienda de 16 de marzo de 1971. Esto no se viene haciendo en los últimos años.

I.2.- CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

En este apartado se presentan los resultados del examen y comprobación de la Cuenta epigrafiada, estructurándose la exposición en las tres partes siguientes:

- **Liquidación de los Presupuestos.** Recoge el análisis de la liquidación de los estados de gastos e ingresos contenidos en la primera parte de la Cuenta, con especial mención al resultado de gestión presupuestaria.

- **Balance de situación integral del Estado.** Tomando como base el balance presentado en la Cuenta y los correspondientes a las distintas oficinas contables que le sirven de fundamento, se analizan tanto sus saldos como sus variaciones, que se reflejan, además, en las distintas partes de que consta la Cuenta y en el estado sobre el movimiento y situación de los avales concedidos por el Tesoro Público a que se refiere el artículo 132.2 del TRLGP.

- **Resultados.** Se analizan los resultados del ejercicio que figuran en la sexta parte de la Cuenta, desglosados en resultados corrientes del ejercicio, resultados extraordinarios, resultados de la cartera de valores y modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores. Asimismo, se analizan las operaciones correspondientes a ejercicios anteriores que están pendientes de regularización.

I.2.1.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

En los anexos I-2.1 y I-2.2 se presenta la liquidación de los Presupuestos de ingresos y gastos de la Administración General del Estado, considerada, para estos últimos, en su doble vertiente económica y orgánica. En ellos se observa que los gastos e ingresos del subsector, medidos por las obligaciones y los derechos reconocidos, ascienden a 13.662.712 millones y 15.003.009 millones de pesetas, respectivamente, representando el 84% de los gastos e ingresos totales del sector público estatal integrante de la CGE, según se aprecia en el anexo I-1.1.

El art. 10 de la LPGE[6] para el ejercicio 1990 establece, por primera vez, un límite al conjunto de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras con cargo al presupuesto del Estado, con el fin de contener el crecimiento del gasto público.

Se ha comprobado[7] que, en casos concretos, tal limitación del gasto ha sido efectiva pero, en otros, simplemente se han dejado de contraer presupuestariamente obligaciones reconocidas o que debieron reconocerse por corresponder a gastos realizados en el ejercicio, posponiendo su contabilización al ejercicio siguiente. Tal práctica soslaya lo dispuesto en el citado artículo y supone adicionalmente el incumplimiento del art. 49 en relación al 63 del TRLGP.

La información suministrada por la Cuenta General del Estado debe ser suficiente para permitir que se pueda comprobar el cumplimiento de los preceptos establecidos por la normativa presupuestaria. En este caso concreto del art. 10 (como en otros puestos de manifiesto anteriormente) no se cumple esta exigencia, dado que no es posible determinar exactamente el importe de las obligaciones reconocidas derivadas de generaciones de crédito y de créditos extraordinarios que se transfieren a otras rúbricas presupuestarias[8], al no segregarse contablemente de las que corresponden a créditos iniciales. No obstante, a continuación se aborda la comprobación del cumplimiento de dicho artículo estimando aquel importe de la forma más favorable, es decir, considerando que los créditos aprobados mediante tales expedientes de modificación se han consumido en su integridad.

Según las cuentas rendidas, las obligaciones reconocidas en 1990 por operaciones no financieras ascendieron a 11.541.778 millones de pesetas. Deduciendo de esta cifra las obligaciones reconocidas derivadas de créditos extraordinarios y generaciones de créditos -125.137 millones como máximo- resultan 11.416.641 millones de pesetas, importe ligeramente inferior a los 11.418.453 millones de pesetas de créditos iniciales para operaciones no financieras. Por tanto, aparentemente, se habría cumplido el art. 10 de la LPGE. Sin embargo, si se tiene en cuenta que, según se observa en el cuadro incluido en el apartado I.2.1.2 posterior, relativo al efecto neto que han tenido sobre los resultados de gestión presupuestaria las operaciones que afectan a los gastos, se han dejado de aplicar al presupuesto del ejercicio determinadas obligaciones -en unos casos ya reconocidas y en otros que debieron reconocerse por corresponder a gastos realizados en el ejercicio- por un importe conjunto de 353.122 millones de pesetas (de ellos 343.039 por operaciones no financieras) se llega a la conclusión de que, en realidad, se ha incumplido el indicado artículo.

I.2.1.1.- Ejecución presupuestaria.

Las observaciones fundamentales en relación a la regularidad contable y legal de la ejecución presupuestaria, deducidas del análisis de la documentación obrante en este Tribunal, con el alcance e incidencias sobre la liquidación presupuestaria que se indica en cada caso, son las que se detallan a continuación:

A) Obligaciones reconocidas.

No se han aplicado al presupuesto de gastos del ejercicio 1990 determinadas obligaciones originadas en el mismo, cuyos conceptos e importes se relacionan a continuación haciendo referencia igualmente a las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores cuya imputación contable se ha efectuado en 1990, así como a las cantidades acumuladas que quedan pendientes de aplicar al cierre del ejercicio.

A.1) Anticipos del Banco de España al Tesoro Público por gastos de emisión de Deuda Pública y aportaciones a Organismos Internacionales.

En el estado de saldos del Banco de España con el Tesoro Público y dentro de la rúbrica general de apelación del Tesoro al Banco de España[9], aparecen contabilizados 136.052 millones de pesetas, que no han sido aplicados al presupuesto de gastos ni aparecen registrados en ninguna de las cuentas del Balance integral del Estado del ejercicio 1990.

Dicho importe se desglosa en:

- 106.319 millones relativos a suscripciones, participaciones, contribuciones y cuotas en Organismos Internacionales de Desarrollo, de los que 3.503 se han hecho efectivos en el ejercicio 1990[10].

---

[6] Ver la transcripción de este artículo en el apartado I.1.3.1 anterior.

[7] Ver Introducción al apartado II de este Informe.

[8] En el ejercicio no se han aprobado suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado.

[9] Los arts. 118 y 101.4 del TRLGP regulan la cuenta corriente a la vista del Tesoro Público en el Banco de España así como el saldo vivo del endeudamiento neto del Estado frente al Banco de España.

[10] Ver apartado I.2.2.1.B.1) de este Informe donde se pone de manifiesto que otra parte de las aportaciones están contabilizadas como inmovilizado financiero del Estado.

- 29.733 millones de anticipos por gastos de emisión de Deuda Pública, de los que 1.437 corresponden al ejercicio 1990 y 28.296 a ejercicios anteriores[11].

Por otra parte, se han aplicado al presupuesto del ejercicio 1990 gastos de emisión de Deuda Pública originados en años precedentes que ascienden a 11.941 millones de pesetas.

A.2) Préstamos del Federal Financing Bank.

A 31/12/90 permanecen sin aplicar a presupuesto 254.679 millones de pesetas por pagos efectuados con cargo a los préstamos del Federal Financing Bank en ejercicios anteriores. En este ejercicio se aplicaron 1.038 millones de pesetas correspondientes, igualmente, a ejercicios anteriores.

Como ya se ha puesto de manifiesto reiteradamente por este Tribunal, no se cumple la normativa que regula la contabilización y aplicación a presupuesto de los gastos financiados con este tipo de préstamos, lo que supone la falta de imputación presupuestaria de unos elevados gastos de inversión con la consiguiente incidencia en los resultados de la ejecución de los presupuestos.

A.3) Anticipos de tesorería.

Al cierre del ejercicio 1990 estaban pendientes de aplicación definitiva 31.565 millones de pesetas correspondientes a obligaciones reconocidas con cargo al anticipo de tesorería concedido al Ministerio de Defensa para atender los desembolsos derivados del Programa Renovado de Inversiones de las Fuerzas Armadas de acuerdo con la autorización contenida en el artículo 76 de la Ley de Presupuestos para 1988. Del importe referido anteriormente, 31.556 millones corresponden a obligaciones reconocidas en 1988, 7 en 1989 y 2 en 1990.

A.4) Transferencias al crédito oficial.

A 31/12/90 está pendiente el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a liquidaciones efectuadas por el Instituto de Crédito Oficial para subvencionar créditos a los damnificados por inundaciones y para compensar, entre otras operaciones, quebrantos por avales y préstamos de reconversión industrial. Según se deduce de la contabilidad de dicho Instituto[12] existe un total de 113.768 millones de pesetas pendientes de pago por los mencionados conceptos de los que el Estado ha reconocido obligaciones por 731 millones de pesetas. Del importe pendiente de reconocer, que asciende a 113.037 millones de pesetas, 19.590 millones corresponden a liquidaciones del ejercicio 1990 y el resto a ejercicios anteriores.

En el Informe anual de 1989 se consideraban obligaciones pendientes de reconocimiento por el Estado a favor del ICO por importe de 108.841 millones de pesetas, según Acuerdo de Consejo de Ministros de 28/12/90. En dicho Acuerdo se incluían indebidamente 15.394 millones de pesetas correspondientes a deuda directa del MOPU con el Banco Hipotecario. El importe de esta deuda directa pendiente de reconocer por el MOPU a 31/12/90 asciende a 15.713 millones, de los que 5.128 corresponden a ejercicios anteriores y 10.585 al ejercicio corriente.

A.5) Relaciones financieras con la CEE.

A 31/12/90 están pendientes de dotar presupuestariamente y por lo tanto de aplicar al presupuesto de gastos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 3.849 millones de pesetas correspondientes a correcciones financieras negativas efectuadas por la Comisión de la CEE al aprobar en 1989 y 1990 las cuentas de los Estados miembros de los ejercicios FEOGA-1987 y FEOGA-1988, respectivamente 2.920 Y 929 millones. Por otra parte, se han aplicado al ejercicio 1990 gastos del ejercicio FEOGA-1987 por 458 millones de pesetas.

Por otra parte, no se han aplicado al presupuesto de gastos 40.686 millones de pesetas correspondientes a la aportación española a la CEE por el concepto "Recurso IVA" de los meses de octubre y noviembre de 1990 y 31.476 millones correspondientes a la liquidación neta de 1989. Por el contrario, se han aplicado 13.408 millones que corresponden a liquidaciones de ejercicios anteriores[13].

A.6) Cuotas sociales.

No aparecen contraídas en cuentas obligaciones por cuotas sociales de funcionarios afiliados al mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) por importe de 59.884 millones de pesetas, de los que 56.260 millones corresponden al ejercicio 1990 y el resto a ejercicios anteriores. Dichas obligaciones, han sido devengadas en los ejercicios indicados, si bien no eran en su totalidad exigibles del Estado al 31/12/90, según resulta de los procedimientos de liquidación de la aportación del Estado contenidos en la O.M. de 13 de mayo de 1976 (MUFACE) y O.M. de 9 de diciembre de 1978 (ISFAS)[14]. De otra parte, en este ejercicio de 1990 se han reconocido obligaciones devengadas en ejercicios anteriores por importe de 56.112 millones de pesetas[15].

A.7) Servicios prestados por CAMPSA y RENFE al Ministerio de Defensa.

No se han reconocido obligaciones con CAMPSA y RENFE por servicios efectivamente prestados al Ministerio de Defensa en el ejercicio 1990 por importe de 1.907 millones de pesetas, habiéndose reconocido el importe de las obligaciones que quedaron pendientes a 31/12/89 por 3.115 millones.

A.8) Obligaciones no contraídas por la Dirección General de Correos y Telégrafos.

La Dirección General de Correos y Telégrafos, en la actualidad Organismo autónomo, tenía una deuda pendiente de imputar al Presupuesto a 31 de diciembre de 1990 por importe de 56.603 millones de pesetas, de los que 20.092 millones corresponden a deudas procedentes del propio ejercicio de 1990[16]. Dentro del citado importe global destacan los gastos de personal (incluida Seguridad Social), con una deuda pendiente a 31 de diciembre de 1990 de 34.089 millones de pesetas, de los que 15.063 millones tienen su origen en 1990. Las nóminas de personal han sido abonadas a sus perceptores mediante anticipos de la Caja Postal de Ahorros registrados como descubiertos en cuenta corriente y contabilizados en su balance en la rúbrica de "crédito al sector público"[17]. Con este proceder, la citada Dirección General, además de otros artículos del TRLGP, incumple lo dispuesto en el art. 101 de la misma disposición que prohíbe cualquier tipo de endeudamiento público que no haya sido autorizado por Ley.

A.9) Subvenciones al tráfico aéreo.

No se han reconocido obligaciones por liquidaciones de subvenciones del ejercicio al tráfico aéreo regular interior entre la Península y los archipiélagos Canario y Balear por importe de 8.165 millones de pesetas. Se han imputado al presupuesto de gastos 5.628 millones de pesetas que corresponden a liquidaciones de años anteriores, ascendiendo las liquidaciones pendientes de reconocer en 31/12/90 a 11.589 millones.*

A.10) Pólizas concedidas a Tabacalera S.A.

No se ha reconocido obligación alguna para la cancelación de dos pólizas de crédito concedidas por el Banco de España a Tabacalera S.A. en enero de 1985, por un importe conjunto de 21.461 millones de pesetas. Estas pólizas fueron asumidas por el Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/85 y su vencimiento se produjo el 25 de enero de 1986[18].

A.11) Seguro de cambio de autopistas.

No se han aplicado al presupuesto de gastos los anticipos del Banco de España al Tesoro derivados de la garantía concedida a las empresas concesionarias de autopistas por seguro de cambio por operaciones en el exterior, cuyo importe en 1990 ascendió a 9.062 millones de pesetas. Puesto que la aplicación al presupuesto de estos gastos viene realizándose con dos años de retraso al incluirse en el proyecto de la Ley de Presupuestos el importe de los gastos habidos en el ejercicio anterior, en este ejercicio se han aplicado 13.894 millones correspondientes a 1988 y quedan pendientes de aplicar 7.628 millones del ejercicio 1989, además del importe ya citado correspondiente a 1990.

A.12) Anticipos recargo municipal IRPF.

No se han reconocido las obligaciones necesarias para la regularización de la deuda que tienen los Ayuntamientos que optaron por la implantación de un recargo sobre el IRPF y que figuran recogidas en el concepto epigrafiado de deudores no presupuestarios por un importe de 6.580 millones de pesetas[19].

---

[11] Ver apartado I.3.2.1.E) de este Informe. La diferencia entre la cifra allí reseñada y la incluida en esta parte parte del Informe corresponde a partidas pendientes de abonar al Banco de España, pero ya aplicadas a presupuesto.

[12] Ver apartado IV.2 de este Informe.

[13] Ver apartado II.5.2.a) de este Informe.

[14] En el caso del ISFAS se ha seguido un sistema de pagos a cuenta y liquidación posterior que no es el establecido en la mencionada Orden.

[15] De los 56.260 millones de pesetas devengadas en 1990 y no contraídos en cuentas, aproximadamente 7.000 millones no eran exigibles hasta 1991 de conformidad con el sistema liquidatorio establecido, y de los 56.112 millones devengados en ejercicios anteriores, era exigible en 1990 una cantidad similar a la anteriormente citada, por importe de 7.000 millones de pesetas, y el resto en años anteriores.

[16] Por correcciones efectuadas en el ejercicio se considera que los gastos pendientes de aplicar a presupuesto correspondientes a ejercicios anteriores ascendían a 36.511 millones de pesetas.

[17] Los intereses devengados por los descubiertos en cuenta corriente figuran entre las distintas partidas que integran la cuenta de prestaciones intercambiadas, cuyo correspondiente saldo anual es ingresado, si bien con notable retraso, por la Caja Postal de Ahorros en el Tesoro Público.

[18] En las alegaciones del Gobierno al Informe de 1989 se manifiesta que las operaciones de cancelación no se realizaron por existir dudas sobre la interpretación del citado art. 6 de la Ley 38/85. Sin embargo, como ya se hizo en la redacción definitiva del citado Informe, se mantiene el criterio del Tribunal, que, además, es el expresado por el Ministro de Hacienda al Gobernador del Banco de España en escrito de fecha 22/12/87. El art. 56 de la LPGE de 1992 reconoce definitivamente la obligación del Estado.

[19] El artículo 71.g) de la LPGE dispone que con cargo a los créditos de la Sección 32ª, Programa 912-C, se hará efectiva una cantidad equivalente a los anticipos realizados a los Ayuntamientos que optaron por la implantación de un recargo sobre el IRPF, de acuerdo con los artículos 8.1 y 9.1 de la Ley 24/83, que autorizaba a los Ayuntamientos a establecer dicho recargo, al haber declarado inconstitucionales dichos artículos la Sentencia de 19 de diciembre de 1985.

A.13) Transferencias a Ayuntamientos por participación en los tributos del Estado.

Durante el ejercicio 1990 no se han reconocido las obligaciones correspondientes a las transferencias para hacer efectiva la liquidación definitiva del ejercicio 1989 por la participación de los Municipios en los tributos del Estado, cuyo importe ascendió a 41.710 millones de pesetas, que sumados a los 34.310 millones que quedaron pendientes de reconocer en el ejercicio anterior arrojan un importe total de obligaciones no reconocidas por este concepto de 76.020 millones de pesetas.

A.14) Prestaciones a los afectados por el síndrome tóxico.

A 31/12/90 el gasto realizado por este concepto, pendiente de imputación presupuestaria, ascendía a 11.990 millones de pesetas, de los cuales, 1.055 millones corresponden al ejercicio 1990[20].

A.15) Otras obligaciones no contabilizadas en el ejercicio.

Además de las referidas en los puntos anteriores, no se han reconocido otras obligaciones originadas en el ejercicio 1990 por un importe, al menos, de 100.083 millones de pesetas, cuyo detalle por secciones y capítulos figura en el anexo I-2.4. Por otra parte, se han reconocido obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 49.646 millones (19.859 de los capítulos 4 y 7 y el resto de los capítulos 6 y 9).

B) Derechos reconocidos.

No se han aplicado al presupuesto de ingresos del ejercicio 1990 determinados derechos imputables al mismo cuyos conceptos e importes se relacionan a continuación, haciendo referencia igualmente a los derechos correspondientes a ejercicios anteriores cuya imputación contable se ha efectuado en 1990, así como a las cantidades acumuladas que quedan pendientes de aplicar al cierre del ejercicio.

B.1) Moneda metálica emitida pendiente de aplicar a presupuesto.

No se ha aplicado al presupuesto el beneficio obtenido en la acuñación de moneda metálica en 1990 constituido por la diferencia entre el valor facial de la moneda emitida y los gastos de acuñación de la misma, que ascendieron a 8.000 y a 3.584 millones de pesetas, respectivamente. El importe pendiente de aplicación a 31/12/90 asciende a 117.701 millones.

No obstante lo expuesto en las alegaciones, la fecha de aplicación contable de la operación referida fue la de 17 de enero de 1991, por lo que no tuvo efectos en el ejercicio informado.

B.2) Préstamo concedido a la Seguridad Social.

A 31/12/90 no se había reconocido en cuentas importe alguno correspondiente al préstamo de 128.600 millones de pesetas concedido a la Seguridad Social por la Ley 3/83, cuyo art. 5 estableció que el reembolso se efectuase en tres anualidades iguales, a partir de 1985[21].

B.3) Dividendos de la Compañía Telefónica.

No se ha contraído el importe correspondiente al dividendo complementario del ejercicio 1989 de la Cía. Telefónica, que ascendió a 6.734 millones de pesetas y cuyo pago se inició el 30/7/90. Se ha reconocido, en cambio, en dicha fecha, el dividendo complementario del ejercicio 1988, que quedó pendiente de contraer en el ejercicio anterior por importe de 5.679 millones de pesetas. Como se viene poniendo de manifiesto reiteradamente por este Tribunal, los dividendos de la Cía. Telefónica que corresponden al Estado, se ingresan en el Tesoro con un año aproximado de retraso sobre la fecha en que se hacen efectivos al resto de los accionistas con evidente perjuicio para el mismo. El importe total de lo ingresado por este concepto en el ejercicio 1990 asciende a 11.290 millones de pesetas.

B.4) Emisión de Pagarés, Notas y Euronotas a medio y corto plazo en el extranjero.

Se han aplicado al presupuesto de este ejercicio 1.240 millones que quedaron pendientes de reconocer en el ejercicio anterior.

B.5) Ingreso de efectos timbrados por multas de tráfico.

A 31/12/90 permanecen sin abonarse al Organismo autónomo Jefatura de Tráfico 4.283 millones de pesetas correspondientes a ingresos efectuados en ejercicios anteriores por multas satisfechas en papel de pagos y aplicados al presupuesto de ingresos del Estado en dichos ejercicios.

B.6) Cupo del País Vasco.

No se han aplicado al presupuesto de ingresos 3.852 millones de pesetas correspondientes a la transferencia por el concepto reseñado, al quedar pendiente de ordenación, al cierre del ejercicio, el libramiento en formalización en el que figuraba este importe como descuento, no obstante haber sido propuesto el día 7 de diciembre de 1990.

B.7) Derechos no reconocidos por transferencias de Organismos autónomos.

De acuerdo con lo indicado en los párrafos explicativos de las diferencias a), b) e i) del cuadro incluido en el apartado I.1.2) anterior, no figuran reconocidos en cuentas los derechos correspondientes a obligaciones contraídas por determinados Organismos autónomos a favor del Estado por un importe global de 57.789 millones de pesetas, de los que 7.789 corresponden al ejercicio 1990 y 50.000 a ejercicios anteriores y se han aplicado al presupuesto de 1990 ingresos de la misma naturaleza generados en el año precedente por 4.269 millones de pesetas.

B.8) Fondos existentes en las Agregadurías del Ministerio de Defensa.

No se han aplicado al presupuesto de ingresos 2.190 millones de pesetas de intereses generados en 1990 por las cuentas bancarias de fondos para adquisiciones de material y servicios (FAMS) y de intereses, abiertas en el extranjero a nombre de diversas Agregadurías Militares, que se mantienen junto con los obtenidos en ejercicios anteriores en las últimas cuentas citadas, cuyo saldo agregado a 31/12/90, según cambio a dicha fecha, ascendía a 9.087 millones de pesetas[22].

B.9) Préstamo concedido a Organismos Portuarios.

Se han reconocido derechos correspondientes a la anualidad de 1989 del préstamo concedido a los Organismos Portuarios para abono parcial del coste de integración del Montepío de Puertos en la Seguridad Social, por importe de 758 millones de pesetas (351 de amortización y 407 de intereses), quedando pendientes de reconocer en 31/12/90, 65 millones (30 de amortización y 35 de intereses).

B.10) Diferencias de cambio positivas.

Se han aplicado 1.687 millones de pesetas al presupuesto de 1990 que correspondían a diferencias de cambio positivas producidas en el ejercicio anterior y no imputadas a su respectivo presupuesto.

Las alegaciones no se refieren a la cuestión contenida en este apartado, en el que se recogen diferencias de cambio "realizadas" en 1989 e incluidas en documentos contables de ese ejercicio, cuya tramitación no terminó hasta 1990.

B.11) Premio de cobranza por recursos propios de la CEE.

No se han aplicado al presupuesto de ingresos por este concepto 669 millones de pesetas, al haberse aplazado a 1991 la imputación correspondiente al mes de octubre de 1990[23].

I.2.1.2.- Resultados de gestión presupuestaria.

Según los datos que figuran en la Cuenta de la Administración General del Estado, en el ejercicio 1990 se produjo un superávit en la ejecución de los presupuestos de 1.340.297 millones de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	SUPERÁVIT (DÉFICIT)
Operaciones corrientes	10.214.233	9.506.130	708.103
Operaciones de capital	173.825	2.035.648	(1.861.823)
Operaciones financieras	4.614.951	2.120.934	2.494.017
TOTAL	15.003.009	13.662.712	1.340.297

Según se observa en el cuadro anterior, el superávit por operaciones financieras no sólo cubre el déficit por operaciones no financieras sino que determina un superávit global de ejecución presupuestaria de 1.340.297 millones de pesetas, que se produce básicamente por las circunstancias que se expresan a continuación.

La Ley de Presupuestos del ejercicio en su art. 48.3 modifica el art. 101.4 del TRLGP, que queda redactado así: "El saldo vivo, al cierre de cada ejercicio, del endeudamiento neto del Estado frente al Banco de España, según se define en el número anterior, no podrá exceder del importe de dicho saldo a 31 de diciembre de 1989, cuyo importe íntegro quedará consolidado como crédito singular al Estado".

Dicho saldo en 31/12/89 ascendía a 1.156.046 millones de pesetas y estaba integrado por un descubierto de la cuenta corriente a la vista del Tesoro Público con el Banco de España de 253.954 millones y créditos singulares por 902.092 millones.

De conformidad con la interpretación dada al inciso final del artículo transcrito, el Estado recibió un anticipo del Banco de España formalizado como crédito singular por importe de 1.156.046

[20] Ver apartado III.8.2.5 de este Informe.

[21] En las alegaciones del gobierno al Informe del ejercicio 1989 se expone que la cancelación de este préstamo se está llevando a cabo a partir del ejercicio 1991 por aplicación del artículo 17 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Dicho artículo establece un procedimiento que supone el incumplimiento del principio de presupuesto bruto al establecer una injustificada compensación entre gastos e ingresos.

[22] Ver apartado III.9 de este Informe, en el que aparecen los resultados de la fiscalización de las referidas cuentas y las causas explicativas de la evolución de su saldo.

[23] Ver apartado II.5.1.b) de este Informe.

millones de pesetas que, al formar parte del endeudamiento neto del Estado frente a aquél, obligaba a mantener al final del ejercicio un elevado saldo en la cuenta corriente a la vista del Tesoro Público para cumplir lo dispuesto en la primera parte del mencionado artículo[24].

En consecuencia, en 1990 hubo de obtenerse financiación no sólo para cubrir el déficit de caja del ejercicio sino también para conseguir una importante variación positiva en la tesorería del Estado.

Así, los derechos reconocidos (cobrados íntegramente) por el capítulo 9 "Pasivos financieros", ascendieron a 4.591.407 millones de pesetas -1.156.046 corresponden al crédito singular referido-, aplicándose 1.246.676 millones a incrementar la tesorería del Estado y los 3.344.731 millones restantes a cubrir el déficit de caja de acuerdo con el siguiente desglose:

- Por operaciones del presupuesto corriente (excluidos ingresos del capítulo 9)	1.535.445
- Por operaciones de presupuestos cerrados	1.388.643
- Por operaciones no presupuestarias	420.643
TOTAL	3.344.731

Por otra parte, en el apartado I.2.1.1 anterior se han realizado una serie de observaciones que repercuten significativamente sobre la exactitud de este superávit de gestión presupuestaria, cuyo resumen se detalla en los cuadros que figuran a continuación, en los cuales aparecen las referencias al apartado en que se encuentran. En dichos cuadros se considera, tanto la incidencia que las operaciones del ejercicio han tenido sobre los resultados de gestión presupuestaria, como la que proviene de operaciones correspondientes a ejercicios anteriores y que fueron imputadas al propio ejercicio 1990, obteniéndose por compensación el efecto neto de las operaciones correspondientes a cada apartado.

DETALLE DEL EFECTO NETO QUE HAN TENIDO SOBRE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA LAS OPERACIONES QUE AFECTAN A LOS GASTOS. (En millones de pesetas)

REFª APTª	CAUSA Y CONCEPTO	OPERAC. EJERCICIO 1990	OP.EJ.ANT. IMPUTADAS A 1990	(DIS.)AUM INDEBIDO SUPERÁVIT
A.1	Anticipos del Banco de España	4.940	(11.941)	(7.001)
A.2	Préstamos del Federal Financing Bank	-	(1.038)	(1.038)
A.3	Anticipos de Tesorería	2	-	2
A.4	Transferencias al crédito oficial	30.175	(10.266)	19.909
A.5	Relaciones financieras con la CEE	73.091	(13.866)	59.225
A.6	Cuotas sociales	56.260	(56.112)	148
A.7	Servicios prestados por CAMPSA Y RENFE al Mº de Defensa	1.907	(3.115)	(1.208)
A.8	Obligaciones no contraídas por D.G. Correos	20.092	-	20.092
A.9	Subvenciones al tráfico aéreo	8.165	(5.628)	2.537
A.11	Seguro de cambio de autopistas	9.062	(13.894)	(4.832)
A.12	Anticipos recargo municipal IRPF	6.580	-	6.580
A.13	Transferencias a Ayuntamientos	41.710	-	41.710
A.14	Transferencias por el síndrome tóxico	1.055	-	1.055
A.15	Otras obligaciones no contabilizadas	100.083	(49.646)	50.437
	SUMA	353.122	(165.506)	187.616

DETALLE DEL EFECTO NETO QUE HAN TENIDO SOBRE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA LAS OPERACIONES QUE AFECTAN A LOS INGRESOS. (En millones de pesetas)

REFª APTª	CAUSA Y CONCEPTO	OPERAC. EJERCICIO 1990	OP.EJ.ANT. IMPUTADAS A 1990	(DIS.)AUM INDEBIDO SUPERÁVIT
B.1	Beneficio en acuñación moneda metálica	(4.416)	-	(4.416)
B.3	Dividendos Cía. Telefónica	(6.734)	5.679	(1.055)
B.4	Emisión de pagarés, notas y euronotas en el exterior	-	1.240	1.240
B.6	Cupo del País Vasco	(3.852)	-	(3.852)
B.7	Derechos no contraídos por transferencias de Organismos Autónomos	(7.789)	4.269	(3.520)
B.8	Intereses cuentas bancarias Agregaduría Mº de Defensa	(2.190)	-	(2.190)
B.9	Préstamo concedido a Organismos portuarios	-	758	758
B.10	Diferencias de cambio positivas	-	1.687	1.687
B.11	Premio de cobranza por recursos propios de la CEE	(669)	-	(669)
	SUMA	(25.650)	13.633	(12.017)

RESUMEN DEL EFECTO NETO SOBRE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA. (En millones de pesetas)

	OPERACIONES	OPERAC. EJERCICIO 1990	OP.EJ.ANT. IMPUTADAS A 1990	(DIS.)AUM INDEBIDO SUPERÁVIT
A)	Que afectan a los gastos	353.122	(165.506)	187.616
B)	Que afectan a los ingresos	(25.650)	13.633	(12.017)
	TOTAL	327.472	(151.873)	175.599

Del cuadro anterior se deduce que el superávit del ejercicio presentado en cuentas se encuentra incorrectamente incrementado en 175.599 millones de pesetas.*

I.2.1.3.- Excepciones y salvedades a los gastos e ingresos aplicados al presupuesto hasta 31/12/90.

En los cuadros que figuran a continuación se recogen los ingresos y gastos que no han sido aplicados al presupuesto o lo han sido de forma incorrecta, estando por tanto pendientes de regularizar a 31/12/90, como ha sido puesto de manifiesto en las observaciones recogidas en el apartado I.2.1.1 anterior cuya referencia concreta se detalla en dicho cuadro. En él aparecen exclusivamente aquellas partidas que eran perfectamente determinables y debieron regularizarse en cumplimiento de los principios que informan la contabilidad pública, distinguiendo las que provienen de operaciones correspondientes al ejercicio 1990 y a los ejercicios 1989 o anteriores.

DETALLE DE LOS GASTOS NO APLICADOS A PRESUPUESTO A 31/12/90 O APLICADOS DE FORMA INCORRECTA. (En millones de pesetas)

REFª APTª	CAUSA Y CONCEPTO	POR OPER. EJERCICIO 1990	POR OPER. EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
A.1	Anticipos del Banco de España	4.940	131.112	136.052
A.2	Préstamos del Federal Financing Bank	-	254.679	254.679
A.3	Anticipos de Tesorería	2	31.563	31.565
A.4	Transferencias al crédito oficial	30.175	98.575	128.750
A.5	Relaciones financieras con la CEE	73.091	2.920	76.011
A.6	Cuotas sociales	56.260	3.624	59.884
A.7	Servicios prestados por CAMPSA Y RENFE al Mº de Defensa	1.907	-	1.907
A.8	Obligaciones no contraídas por D.G. Correos	20.092	36.511	56.603
A.9	Subvenciones al tráfico aéreo	8.165	3.424	11.589
A.10	Pólizas concedidas a TABACALERA S.A	-	21.461	21.461
A.11	Seguro de cambio de autopistas	9.062	7.628	16.690
A.12	Anticipos recargo municipal IRPF	6.580	-	6.580
A.13	Transferencias a Ayuntamientos	41.710	34.310	76.020
A.14	Transferencias por el síndrome tóxico	1.055	10.935	11.990
A.15	Otras obligaciones no contabilizadas	100.083	-	100.083
	SUMA	353.122	636.742	989.864

[24] En la actualidad el Tribunal de Cuentas está realizando una fiscalización específica al Banco de España en la que se abordan, entre otros extremos, sus relaciones con el Tesoro Público.

DETALLE DE LOS INGRESOS NO APLICADOS A PRESUPUESTO A 31/12/90 O APLICADOS DE FORMA INCORRECTA. (En millones de pesetas)

REFª APTª	CAUSA Y CONCEPTO	OPERAC. EJERCICIO 1990	POR OPER. EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
B.1	Beneficio en acuñación moneda metálica	(4.416)	(113.285)	(117.701)
B.2	Préstamo concedido a la Seguridad Social	-	(128.600)	(128.600)
B.3	Dividendos Cía. Telefónica	(6.734)	-	(6.734)
B.5	Ingreso de efectos timbrados por multas de tráfico	-	4.283	4.283
B.6	Cupo del País Vasco	(3.852)	-	(3.852)
B.7	Derechos no contraídos por transf. de Organismos Autónomos	(7.789)	(50.000)	(57.789)
B.8	Intereses cuentas bancarias Agregaduría Mª de Defensa	(2.190)	(6.897)	(9.087)
B.9	Préstamo concedido a Organismos portuarios	-	(65)	(65)
B.11	Premio de cobranza por recursos propios de la CEE	(669)	-	(669)
	SUMA	(25.650)	(294.564)	(320.214)

I.2.1.4.- Gastos e ingresos de naturaleza presupuestaria que deberán ser recogidos por presupuestos de ejercicios posteriores al de 1990.

En el caso de que los principios que informan la contabilidad pública se hubieran aplicado razonablemente, las liquidaciones presupuestarias de los correspondientes ejercicios deberían haber recogido las operaciones a que se refieren los cuadros incluidos en el apartado inmediato anterior, y al no haber sido así, su regularización, por un importe neto de 669.650 (989.864 - 320.214) millones de pesetas, habrá sido o deberá ser soportada por ejercicios posteriores a 1990.

Asimismo, deberán ser soportados por presupuestos posteriores a 1990:

a) Los intereses implícitos corridos y no vencidos de Letras y Pagarés del Tesoro vivos a 31/12/90, que, según se indica en el apartado I.2.2.2.D.3) posterior, ascienden a 665.352 millones de pesetas, y serán aplicados a presupuesto en la fecha de su vencimiento, de acuerdo con la normativa vigente.

b) Las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al IRPF-89[25] y del IVA trasladadas al ejercicio 1991, por importes aproximados de 100.400 y 26.000 millones de pesetas[26], al no haberse dictado los correspondientes actos administrativos del reconocimiento del derecho a la devolución en el ejercicio 1990.

Por último, hay que señalar que quedan por cancelar 131.265 millones de pesetas correspondientes a las pérdidas de RENFE del periodo 1984-1987 que fueron asumidas por el Estado[27] de acuerdo con la cláusula 14 del Contrato-programa 1988-1991 suscrito con RENFE, comprometiéndose a cancelarlas en el plazo de 10 años a través de la inclusión en los presupuestos anuales, a partir de 1989, de una décima parte de dicho importe. En el ejercicio 1990 se han cancelado 16.340 millones de pesetas.

I.2.2.- BALANCE DE SITUACIÓN INTEGRAL.

El anexo I-3.1 recoge el balance diferencial del ejercicio confeccionado a partir de los balances de situación rendidos en las Cuentas Generales de los ejercicios 1989 y 1990, si bien, con el fin de comparar cantidades homogéneas, se ha ajustado el primero a las nuevas cuentas establecidas en la Resolución de la IGAE de 27/12/89, por la que se modifica el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y se aprueba la Instrucción Provisional de Contabilidad del Inmovilizado no Financiero de la Administración del Estado que ha de regir a partir de 1/1/90.

Del análisis de las partidas que figuran en dicho anexo se formulan las observaciones que se exponen a continuación:

I.2.2.1.- Activo.

A) Inmovilizado no financiero

Como cuestión previa, hay que señalar que la aplicación de la Resolución anteriormente citada, relativa a la contabilización del Inmovilizado a que se refiere este apartado, ha presentado las siguientes incidencias en este primer ejercicio de vigencia:

a) Las reglas 24 y 31, que disponen el traspaso a la Central Contable de las inversiones que hayan entrado en funcionamiento durante el ejercicio, han sido aplicadas desigualmente por las distintas oficinas contables, existiendo Departamentos ministeriales que no han traspasado importe alguno (Justicia, Economía y Hacienda, Interior, Sanidad y Consumo, Cultura y Administraciones Públicas) mientras que otros (Educación y Ciencia, Relaciones con las Cortes y Portavoz del Gobierno) han traspasado el saldo íntegro a 31/12/90 de sus cuentas de inmovilizado no financiero.

b) No se han cumplido las reglas 31 y 32 que disponen el cargo a las cuentas 109 "Patrimonio entregado al uso general" y 100 "Patrimonio", por el importe de las infraestructuras y bienes que hayan sido entregados al uso general y por el de las inversiones militares que hayan entrado en funcionamiento en el ejercicio, respectivamente.

c) Existen discrepancias entre las cantidades imputadas a las cuentas del PGCP y las que corresponderían en función de la aplicación de la tabla de las clasificaciones económicas que se aprueba en la citada Resolución. Las mayores diferencias se producen en los Ministerios de Transportes y Obras Públicas, según el siguiente detalle, en millones de pesetas:

AGRUPACIONES DEL BALANCE	TRANSPORTES	MOPU	TOTAL
Inmovilizado material	122	878	1.000
Inversiones públicas	(8.814)	(1.346)	(10.160)
Inmovilizado inmaterial	8.670	182	8.852

A.1) Inmovilizado material

El importe de esta agrupación, que asciende en 31/12/90 a 1.690.376 millones de pesetas, está compuesto por los gastos en inversiones reales que se han imputado a las cuentas de inmovilizado material propio y de dominio público desde 1/1/86, con excepción de los bienes destinados al uso general.

No se acompaña a la Cuenta General rendida el estado resumen del Inventario del Inmovilizado Material en el que, de acuerdo con la Instrucción de contabilidad de la Central Contable, se recogería un desglose del inmovilizado material con mención, en su caso, de la correspondiente amortización acumulada[28].

A.2) Inversiones públicas

El importe de esta agrupación asciende a 4.938.145 millones de pesetas, de los que 3.149.507 millones corresponden a la cuenta de "Inmovilizado material pendiente de clasificar hasta 1985", sustitutiva de la que en el ejercicio anterior se denominaba "Inmovilizado material de dominio público pendiente de clasificar hasta 1985"[29].

En el ejercicio 1990 la citada cuenta ha sufrido una disminución en su saldo de 22.090 millones de pesetas debido esencialmente a la reclasificación de unos préstamos concedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a UTECO y Cooperativa Agrícola de Jaén con anterioridad a la entrada en funcionamiento del SICOP.

A.3) Inmovilizado inmaterial.

El saldo de las cuentas que componen esta agrupación asciende en 31/12/90 a 107.799 millones de pesetas, habiendo experimentado en el ejercicio 1990 un incremento de 17.167 millones, que viene afectado por la discrepancia referida en el punto c) de la introducción a este apartado I.2.2.1.A). En dicho saldo se incluyen 7.866 millones de pesetas correspondientes a obligaciones reconocidas en el ejercicio 1990 para financiar acciones relativas al desarrollo de determinadas regiones desfavorecidas mediante un mejor acceso a los servicios avanzados de telecomunicaciones (Programa STAR 1987-1991), que han sido presupuestadas y contabilizadas como inversiones reales cuando, por la naturaleza de las operaciones, se trata propiamente de subvenciones[30]. Además, como ha sido puesto de manifiesto en anteriores Informes, se incluyen otras partidas, por importe, al menos, de 3.201 millones de pesetas, que también tienen la consideración de gastos corrientes por naturaleza, así como otras, por una cuantía mínima

[25] La Ley 20/89 de 28 de julio, fijó como plazo de declaración e ingreso de este impuesto en el ejercicio 1989, el mes de noviembre.

[26] Ver apartado II.3.1 de este Informe.

[27] Las pérdidas de RENFE en dicho periodo, una vez deducidas las subvenciones de explotación ascendieron a 278.904 millones de pesetas.

[28] La O.M. de 12 de 12 de diciembre de 1991 implanta en la Administración del Estado a partir de 1/1/92 un nuevo sistema de información sobre el Inventario General de Bienes Inmuebles.

[29] Esta cuenta, como ya se puso de manifiesto en anteriores Informes, se utilizó en la implantación del Sistema de Información Contable de la Administración del Estado (SICOP) como compensadora de las cuentas de activo, pasivo y neto, que figuraban en los balances de apertura de las distintas oficinas contables descentralizadas, y cuya denominación fue improcedente, ya que en la misma se incluyeron también otras partidas que no constituyen propiamente inmovilizado material y que se van reclasificando a medida que se determina su verdadera naturaleza.

[30] Ver apartado III.7.1 de este Informe.

de 5.735 millones, que no llegaron a materializarse al corresponder a pagos a justificar que se reintegraron, sin que hayan sido objeto de corrección en el ejercicio 1990.

Este inmovilizado, al igual que los restantes, no es objeto de amortización y su importe, que se incrementa por adición año tras año desde 1986, no ha sido objeto de depuración alguna, no obstante su singular contenido y los principios de valoración y contabilidad generalmente aceptados para el mismo.

B) Inmovilizado financiero.

B.1) Inversiones financieras.

El saldo de las cuentas representativas de las acciones, obligaciones y bonos propiedad de la Administración del Estado, menos los desembolsos pendientes sobre las mismas, asciende en 31/12/90 a 314.890 millones de pesetas, de los cuales 10.252 millones corresponden a una parte de las aportaciones del Estado a Organismos Internacionales de Desarrollo (2.343 millones al Banco Europeo de Inversiones y 7.909 a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero[11]).

El 1/1/90, a la entrada en vigor de la Orden de 9 de junio de 1989, por la que se aprobó la Instrucción de Contabilidad de la Cartera de Valores de la Administración del Estado, se efectuó un asiento de rectificación con el fin de actualizar los saldos de las cuentas relativas a la Cartera de acuerdo con los criterios de valoración contenidos en la propia Instrucción.

El importe neto de esta regularización supuso una disminución del saldo contable de estas inversiones y, correlativamente, un cargo en la cuenta de "Otros resultados extraordinarios" por importe de 70.037 millones de pesetas, sobre el que procede hacer las siguientes observaciones:

a) 17.380 millones de pesetas no debieron cargarse a la cuenta de "Otros resultados extraordinarios", ya que por la naturaleza de las operaciones que dieron lugar a que la cartera quedase sobrevalorada, por la fecha en que se produjeron dichas operaciones y por el tratamiento contable dado a la cuenta de "Inmovilizado material pendiente de clasificar hasta 1985", debieron ser cargadas en ésta última.

b) La regularización del saldo contable de las acciones de INTELHORCE debió hacerse teniendo en cuenta que el precio de venta de éstas se fijó en 2.000 millones de pesetas a pagar en los años 1991, 1992 y 1993 sin intereses de aplazamiento y, por tanto, el asiento de ajuste debería haber incluido un cargo en la cuenta correspondiente de activo, que pusiera de manifiesto esta circunstancia[12].

c) El valor de las acciones de Tabacalera S.A. ha sido revalorizado en un importe superior a 6.838 millones de pesetas sobre el que le correspondería si a las operaciones realizadas con estas acciones se les hubiesen aplicado los criterios de valoración contenidos en la Instrucción de Contabilidad de la Cartera de Valores.

B.2) Préstamos.

El saldo de las cuentas representativas de préstamos concedidos a medio y largo plazo asciende en 31/12/90 a 1.510.628 millones de pesetas, habiendo experimentado un incremento en el ejercicio de 151.184 millones, de los que 22.720 corresponden a la incorporación del préstamo concedido a UTECO y Coop. Agrícola Provincial de Jaén a que se refiere el punto I.2.2.1.A.2) anterior.

En dicho saldo se encuentran incluidos los concedidos al Consorcio de Compensación de Seguros para su entrega a CESCE desde el ejercicio 1984 por un importe de 318.235 millones de pesetas. Dichos préstamos, como viene denunciando reiteradamente este Tribunal, atienden a la cobertura de riesgos políticos en el seguro de crédito a la exportación cuando las primas recaudadas y las reservas constituidas son insuficientes, tratándose en definitiva de la asunción de una pérdida acumulada cuyo importe no podrá compensarse actuarialmente con la emisión de futuras primas.

B.3) Instituto de Crédito Oficial.

Esta agrupación, cuyo saldo deudor en 31/12/90 asciende a 1.004.637 millones de pesetas, presenta el siguiente desglose, en millones de pesetas:

- Préstamo ordinario al ICO	678.395
- Préstamos especiales al ICO	21.504
- Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo	192.073
- Aportación del Estado al patrimonio del ICO	112.665
TOTAL	1.004.637

En relación con los anteriores importes se realizan las siguientes observaciones, que ya fueron efectuadas en el Informe del ejercicio 1989:

a) La inclusión en esta agrupación de la cuenta del Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo proviene de considerar las dotaciones al FAD como préstamo del Estado[13]. Sin embargo, dado que el FAD carece de personalidad jurídica y el ICO es un mero agente financiero, la contabilidad del Estado debería reflejar la auténtica realidad de estas operaciones. Así, el saldo de esta cuenta, -192.073 millones de pesetas-, recoge el importe de las dotaciones al ICO para su gestión, pero no ofrece las consecuencias y situaciones derivadas de estas operaciones, cuyo titular definitivo es el Tesoro. En este sentido:

- No ofrece información sobre las distintas fases en que se concreta cada una de estas operaciones.

- Parte de las dotaciones entregadas por el Tesoro al ICO se han transformado en donaciones a distintos países receptores, representando, por lo tanto, un gasto firme para el Tesoro y no un crédito realizable, como parece deducirse de su ubicación en el balance de situación integral rendido.

- No recoge las cantidades realmente desembolsadas y entregadas a los distintos países receptores y aún pendientes de cobro, que, en definitiva, representan el auténtico saldo de créditos FAD concedidos, ni el importe de los intereses devengados y de los reintegros que incrementan el saldo del Fondo, ni la situación de créditos impagados, morosos y refinanciados, ni por último, las consecuencias de destacada importancia derivadas de las diferencias de cambio al final de cada ejercicio.

Las alegaciones a este apartado son similares a las realizadas al Informe de fiscalización del FAD, aprobado por el Pleno del Tribunal en sesión de 29 de julio de 1993, en cuya redacción definitiva se concluye que "las operaciones del FAD deberán estar reflejadas en la contabilidad de la Administración General del Estado, al que corresponde su titularidad, recogiendo la situación de los créditos concedidos, así como las donaciones realizadas y los resultados por intereses y diferencias de cambio, entre otros conceptos", a la vez que se recomienda "dotar al FAD de la normativa adecuada que supere la indefinición y contradicciones señaladas en el presente Informe y aborde suficientemente aspectos fundamentales en lo que se refiere a su personalidad jurídica, a sus fines, a sus fuentes de financiación y al correcto reflejo contable de toda su actividad".

b) Similares observaciones son aplicables, igualmente, a los préstamos de "Gobierno a Gobierno" que bajo la rúbrica de préstamos especiales importan 21.504 millones de pesetas.

c) La aportación del Estado al patrimonio del ICO[14] no es una participación accionarial y como tal no es realizable, debiendo tenerse en cuenta que con cargo a su importe el ICO hubo de hacer frente al pago de los intereses de Cédulas para inversiones correspondientes al segundo semestre de 1987, por 53.342 millones de pesetas. Por todo lo cual este concepto no debe incluirse dentro del activo del balance aquí analizado, sino que ha de regularizarse con cargo a resultados, como pérdida firme de ejercicios anteriores.

B.4) Créditos por enajenación de inmovilizado.

No están recogidos en el balance 2.000 millones de pesetas, que corresponden al importe aplazado de la venta de las acciones de INTELHORCE, a que se ha hecho referencia en el apartado B.1) anterior, ni 3.107 millones de la enajenación de inversiones reales del Estado, también con pago aplazado.

C) Gastos a cancelar.

Están constituidos básicamente por las cuentas de "Aportaciones del Estado por deudas asumidas del interior y del exterior", que presentan un saldo conjunto a 31/12/90 de 604.171 millones de pesetas, habiéndose asumido durante el ejercicio 1990, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el mismo, 125.500 millones de pesetas, que corresponden a obligaciones y créditos del INI.

D) Deudores.

D.1) Deudores por derechos reconocidos.

Las cuentas representativas de los derechos presupuestarios reconocidos presentaban al cierre del ejercicio, después de las operaciones de regularización, el siguiente detalle en millones de pesetas:

- Del ejercicio corriente	330.065
- De presupuestos cerrados	577.786
TOTAL	907.851

En relación con los anteriores importes se realizan las siguientes observaciones:

[11] Ver apartado I.2.1.1.A.1) de este Informe donde se recoge qué otra parte de las aportaciones está pendiente de contabilizar incluida en créditos singulares del Banco de España al Tesoro Público.

[12] Ver apartados I.2.2.1.C.1.a) y I.2.3.1.C) del Informe del ejercicio 1989.

[13] Acuerdo del Consejo de Ministros de 11/12/87.

[14] El art. 127 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988 establecía en su apartado 5 el importe del patrimonio inicial del ICO, configurado como sociedad estatal, en 210.000 millones, de los que 112.665 millones corresponden a una aportación del Estado, derivada de la conversión de un préstamo por idéntico importe en aportación patrimonial.

a) Los saldos pendientes con uno o más años de antigüedad representan el 64% del total, habiéndose ingresado en el ejercicio solamente un 18% de los saldos pendientes a 31/12/89, lo que pone de manifiesto un bajo índice de cobro.

Esta situación, que es denunciada en todos los Informes Anuales del Tribunal, debe ser objeto de corrección, tanto desde el punto de vista operativo como contable. La contabilización y mantenimiento de saldos que, por su antigüedad, posiblemente sean incobrables repercute directamente sobre la representatividad del balance y de las cuentas de resultados rendidas en los correspondientes ejercicios.

b) Los saldos de estas cuentas se ven afectados por algunas de las observaciones efectuadas en el apartado I.2.1.1.B) de este Informe.

D.2) Entes Públicos, c/c en efectivo.

Dentro de esta agrupación figura la cuenta "Ayuntamientos R.D. 1079/86", con un saldo al cierre del ejercicio de 7.788 millones de pesetas, que procede, en su mayor parte, de entregas a cuenta efectuadas a los Ayuntamientos que han asumido la recaudación voluntaria y ejecutiva de tributos municipales en virtud de lo previsto en distintas leyes de Presupuestos, sin que se haya producido el reintegro de dicho saldo, con la correspondiente incidencia en la Tesorería de los Ayuntamientos afectados.

D.3) Otros deudores no presupuestarios.

Dentro de las partidas que componen este epígrafe, cuyo importe global a 31/12/90 ascendía a 303.069 millones de pesetas, figura el concepto de "Anticipo recargo municipal IRPF" con un saldo deudor de 6.580 millones de pesetas, que debiera haberse cancelado con aplicación al presupuesto de gastos del ejercicio, como se hizo referencia en el punto I.2.1.1.A.12) anterior.

E) Cuentas financieras.

La partida más significativa de esta agrupación es la de "Bancos e Instituciones de Crédito", con un saldo deudor a 31/12/90 de 968.540 millones de pesetas y con el desglose que se detalla en el anexo I-3.2.A).

Según se deduce del estado de saldos del Banco de España con el Tesoro Público a 31/12/90, el importe anterior no incluye 24.164 millones de pesetas, correspondientes a las siguientes cuentas:

- Cuentas de fondos en firme	3.828
- Tesoro Público-Provisiones de fondos	43.824
- Cuentas restringidas de recaudación	1.200
- Tasas y exacciones parafiscales	654
- Cuentas de devolución de impuestos	8.862
- Provisión Fondos cobertura ctos. documentarios	5.808
- Servicio Financiero de la Deuda Exterior	(8.686)
- Gastos de suscripción, canje y conversión de Deudas	(31.326)
TOTAL	24.164

Las cuatro primeras cuentas son objeto de tratamiento específico en la normativa contable vigente y su falta de inclusión en la contabilidad rendida priva al Balance de una información de marcado interés.

La cuenta de gastos de suscripción, canje y conversión de Deudas, corresponde a los anticipos efectuados por el Banco de España para gastos de esta naturaleza, cuya incidencia en los resultados de ejecución del presupuesto ya ha sido puesta de manifiesto en el apartado I.2.1.1.A.1) de este Informe.

Por otra parte, figura también dentro de esta agrupación la cuenta de "Préstamos concedidos a corto plazo", cuyo saldo no es representativo de los importes pendientes de reembolsar por estos préstamos, debido al procedimiento contable utilizado para reflejar las operaciones de préstamos a funcionarios, ya que por los importes concedidos durante el ejercicio se produce un cargo a la cuenta de "Otros resultados extraordinarios" en la contabilidad del Centro Gestor correspondiente, mientras que por los reintegros se produce un abono en la misma cuenta en las cajas pagadoras, compensándose a largo plazo estos importes. Como consecuencia de ello, no es posible conocer y controlar contablemente el saldo vivo de los referidos préstamos.

Por último, hay que señalar que tampoco están recogidos en esta agrupación los saldos de las cuentas bancarias de fondos para adquisiciones de material y servicios (FAMS) y de intereses, abiertas en el extranjero a nombre de diversas Agregadurías Militares, cuyos saldos a 31/12/90, según cambio a dicha fecha, eran de 12.272 y 9.087 millones de pesetas[15], respectivamente.

[15] Ver apartado III.9 de este Informe.

F) Partidas pendientes de aplicación.

F.1) Entregas en ejecución de operaciones.

Dentro de esta cuenta el concepto más importante corresponde a "Entregas al Banco de España por pagos al exterior", cuyo saldo a 31/12/90 asciende a 40.672 millones de pesetas.

No se han cargado a este concepto los anticipos efectuados por el Banco de España en los meses de noviembre y diciembre de 1990 por un importe de 5.969 millones de pesetas.

F.2) Otras partidas pendientes de aplicación.

Los saldos a 31/12/90 de las cuentas que integran este epígrafe son los siguientes, en millones de pesetas:

- Gastos de acuñación de moneda metálica pendientes de aplicación	13.534
- Diferencias de emisión de Deuda Pública exterior	(301)
- Otras partidas pendientes de aplicación	795.667
TOTAL	808.900

Respecto a estos saldos se hacen las siguientes observaciones:

a) El saldo de la cuenta "Gastos de acuñación de moneda metálica pendientes de aplicación" representa un gasto real que debe ser regularizado al cierre del ejercicio con cargo a los resultados corrientes. El importe correspondiente a 1990 fue de 3.584 millones de pesetas, que ya ha sido deducido del valor facial para la determinación del beneficio en acuñación que está pendiente de aplicar al Presupuesto de Ingresos, como se ha puesto de manifiesto en el apartado I.2.1.1.B.1).

b) El saldo de la cuenta "Otras partidas pendientes de aplicación", se compensa en el haber del balance con la cuenta de "Propuestas de pago en tramitación. Ejercicio corriente", que se incluye en el epígrafe de "Acreedores por obligaciones reconocidas", debido al procedimiento contable utilizado para ajustar a su valor en 31/12/90 el saldo de la cuenta de "Bonos y Pagarés del Tesoro a corto plazo".

I.2.2.2.- Pasivo.

A) Patrimonio y reservas.

Esta agrupación está compuesta por las cuentas de "Resultados pendientes de aplicación" correspondientes a los resultados negativos de los ejercicios 1982 a 1989, cuyo saldo deudor conjunto asciende a 7.415.635 millones de pesetas.

B) Subvenciones de capital.

Dentro de esta agrupación figura la cuenta "Subvenciones de capital recibidas del Estado" con un saldo a 31/12/90 de 130.287 millones de pesetas que corresponde a transferencias recibidas por el presupuesto de Acciones Conjuntas con la CEE con cargo a los presupuestos ordinarios de gastos en los ejercicios 1986 y 1987 por importe de 51.942 y 78.345 millones de pesetas, respectivamente.

Como se ha puesto de manifiesto en anteriores informes, esta cuenta, al no haber sido objeto de ajuste en cada ejercicio con abono a las correspondientes de resultados, queda indebidamente incrementada por los indicados importes, junto con la de "Resultados pendientes de aplicación", representando en definitiva beneficios que habrán de regularizarse en ejercicios posteriores, como se detalla en el anexo I-7.2[16].

Igualmente, el saldo de las cuentas de "Subvenciones de capital recibidas de Organismos autónomos" se encuentra incrementado indebidamente en 1.283 millones de pesetas, procedentes de la contabilización en 1989 y 1990 de transferencias corrientes de los Organismos autónomos Aeropuertos Nacionales e INEM[17], que como tales debieron constituir partidas de ingreso de la cuenta de resultados corrientes del ejercicio.

C) Deudas a medio y largo plazo.

El detalle de las cuentas que corresponden a esta agrupación figura en el anexo I-3.2.B), siendo el saldo conjunto de las mismas en 31/12/90 de 8.265.246 millones de pesetas, lo que representa un aumento del 30% sobre el saldo existente al final del ejercicio 1989.

C.1) Empréstitos.

El incremento de los saldos de las cuentas correspondientes a esta agrupación ascendió a 557.176 millones de pesetas. Se han asumido en el ejercicio 30.000 millones de pesetas de deudas del INI en

[16] La salida del presupuesto ordinario se consideró como gasto corriente en los ejercicios de procedencia, mientras que la entrada en el presupuesto extraordinario se consideró incremento del neto patrimonial en la cuenta que nos ocupa. Este procedimiento contable que es el general de las subvenciones de capital debió ser corregido, dado que la transferencia se producía entre dos presupuestos de un mismo agente con contabilidad única.

[17] Aeropuertos Nacionales 511 millones en 1989 e INEM, 699 millones en 1989 y 73 millones en 1990.

virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Presupuestos para 1990, ascendiendo la diferencia neta entre emisiones y amortizaciones de Deuda del Estado a 567.015 millones de pesetas.

C.2) Préstamos.recibidos a medio y largo plazo.

El saldo conjunto de las cuentas que integran esta agrupación asciende en 31/12/90 a 2.307.973 millones de pesetas, habiéndose incrementado en el ejercicio en 1.298.975 millones.

Sobre estos saldos se formulan las siguientes observaciones:

a) Los préstamos recibidos del Banco de España están constituidos por dos créditos singulares[9]. El primero, que corresponde a insuficiencias presupuestarias de ejercicios anteriores concedido por la Ley 3/83, de 29 de junio, figura en cuentas con un saldo acreedor de 552.280 millones de pesetas, importe que no coincide con el que figura en el estado de saldos del Banco de España con el Tesoro Público, al haber quedado pendiente de ordenar la operación correspondiente a la amortización de este ejercicio por un importe de 16.244 millones de pesetas, que fue propuesta para el pago el día 21/12/90. El segundo, cuyo saldo es de 1.156.046 millones de pesetas, corresponde a la consolidación como crédito singular del saldo vivo del endeudamiento neto del Estado frente al Banco de España en 31/12/89, al que se ha hecho referencia en el punto I.2.1.2) anterior.

b) Entre los préstamos a medio y largo plazo del interior no está incluido un préstamo concedido por el antiguo Banco de Crédito a la Construcción para la construcción de casas-cuartel de la Guardia Civil en distintos puntos del Territorio Nacional, cuyo saldo pendiente a 31/12/90 asciende a 384 millones de pesetas.

c) Los préstamos del exterior han sido objeto de ajuste a 31/12/90 según los tipos de cambio existentes en dicha fecha, disminuyendo o aumentando el saldo pendiente de pago, con abono o cargo a la cuenta de resultados corrientes del ejercicio, con un efecto neto positivo sobre éstos de 23.013 millones de pesetas. El importe de las diferencias de cambio positivas regularizadas con cargo a estas cuentas de préstamos, asciende a 28.561 millones de pesetas[10].*

C.3) Préstamos asumidos.

Se han incorporado al balance préstamos asumidos del Instituto Nacional de Industria por un importe global de 95.000 millones de pesetas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Presupuestos para 1990. De estos, 57.074 millones son del interior y el resto del exterior.

No está incluido el préstamo asumido por el Estado correspondiente al concertado en su día por el Ayuntamiento de Cádiz con el Banco de Crédito Local, relativo al puente sobre la Bahía de Cádiz, cuyo importe pendiente de amortizar a 31/12/90 asciende a 220 millones de pesetas.

D) Deudas a corto plazo.

D.1) Acreedores por obligaciones reconocidas.

Se recogen en este epígrafe las deudas de la Administración del Estado por obligaciones presupuestarias reconocidas, cuyo pago no ha sido aún propuesto por el Centro gestor correspondiente, u ordenado por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. El detalle de los saldos de las cuentas que integran este epígrafe, cuyo importe global asciende a 2.087.817 millones de pesetas, es el siguiente:

	PENDIENTES DE PROPONER PAGO	PENDIENTES DE ORDENAR PAGO
Ejercicio corriente	87.025	1.876.520
Presupuestos cerrados	51.352	95.524
Anticipos de Tesorería	2	(22.606)
TOTAL	138.379	1.949.438

En relación con los anteriores importes se realizan las siguientes observaciones:

a) El importe de las propuestas de pago expedidas con anterioridad a 30/11/90 asciende a 287.650 millones de pesetas, lo que implica un evidente retraso en la gestión de estos pagos.

b) El importe de las propuestas de pago de presupuestos cerrados expedidas con anterioridad a 31/12/89 y que han quedado pendientes de ordenar en 31/12/90 asciende a 94.384 millones de pesetas, correspondiendo, en su mayor parte, a libramientos expedidos a favor de Organismos autónomos, otros Entes públicos y Asociaciones.

c) Existen obligaciones pendientes de proponer su pago con una antigüedad superior a dos años cuyo importe asciende a 37.975 millones de pesetas.

d) Finalmente, los saldos de estas cuentas se ven asimismo afectados por algunas de las observaciones efectuadas en el apartado I.2.1.1.A) de este Informe, relativo a obligaciones reconocidas.

D.2) Seguridad Social acreedora.

El saldo de esta cuenta se ha incrementado en el ejercicio 1990 en 609 millones de pesetas, debido, entre otras causas, a que han quedado pendientes de pago en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera los saldos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre por 428 y 416 millones de pesetas, respectivamente, mientras que al cierre del ejercicio 1989 sólo estaba pendiente el saldo del mes de diciembre de dicho año por un importe de 392 millones.

D.3) Préstamos a corto plazo fuera del sector público.

En este epígrafe se encuentran comprendidos los Pagarés del Tesoro, que han tenido en el ejercicio 1990 una disminución de su saldo de 795.666 millones de pesetas, y las Letras del Tesoro que se han visto incrementadas en 1.711.535 millones, resultando en definitiva un incremento neto conjunto, por estos dos conceptos, de 915.869 millones de pesetas, debido fundamentalmente a las razones expuestas en el punto I.2.1.2) anterior. El detalle a 31/12/90, en millones de pesetas, es el siguiente:

	EFECTIVO	INTERESES IMPLÍCITOS	NOMINAL
Pagarés del Tesoro	3.418.858	288.953	3.707.811
Letras del Tesoro	6.453.647	928.620	7.382.267
TOTAL	9.872.505	1.217.573	11.090.078

Los intereses implícitos presentan el siguiente detalle según su fecha de devengo:

	1.989	1.990	RESTO	TOTAL
Pagarés del Tesoro	18.998	127.154	142.801	288.953
Letras del Tesoro	-	519.200	409.420	928.620
TOTAL	18.998	646.354	552.221	1.217.573

Los intereses vencidos en 1990 correspondientes a ejercicios anteriores ascendieron a 550.860 millones de pesetas, siendo por tanto la incidencia de su periodificación sobre los resultados del ejercicio de 95.494 millones y sobre los acumulados de 665.352 millones de pesetas.

D.4) Otros acreedores no presupuestarios.

Permanece sin cancelar desde el año 1986 el concepto "Cuotas de Formación Profesional" con un saldo acreedor de 1.250 millones de pesetas, cuyo mantenimiento, como se ha puesto de manifiesto en Informes anuales anteriores, carece de fundamento al corresponder en origen a derechos del Organismo suprimido "Patronato de Formación Profesional" en los que se subrogó el Estado.

D.5) Banco de España. Créditos singulares.

No aparecen recogidos en el Balance de situación integral, dentro de esta agrupación de "Deudas a corto plazo", los siguientes créditos singulares que figuran en el estado de saldos del sector público en el Banco de España:

a) La deuda vencida correspondiente a la subrogación de los créditos de Tabacalera S.A., Ley 38/85, por importe de 21.461 millones de pesetas, que ha de ser satisfecha por el Tesoro Público, a la que se ha hecho referencia en el apartado I.2.1.1.A.10) de este Informe.

b) Los anticipos efectuados por el Banco de España para suscripción, participación, contribución y cuotas en Organismos Internacionales de Desarrollo, cuyo importe global asciende en 31/12/90 a 106.319 millones de pesetas, como se ha puesto de manifiesto en el apartado I.2.1.1.A.1) de este Informe[11].

Las alegaciones no están sustentadas en la normativa específica de estas operaciones que adjudica su titularidad al Estado; lo que, por otra parte, es el criterio del Banco de España que contabiliza los anticipos de referencia incluyéndolos en el cálculo de la posición del Tesoro, así como del propio Gobierno al aprobar los estados contables del Banco de España.

Este planteamiento no impide su oportuna modificación en el caso de que una nueva regulación, tras los acuerdos de Maastricht, así lo contemplara.

[9] En el Estado de saldos del Banco de España con el Tesoro Público figuran otros tres créditos singulares más, de los cuales los correspondientes a suscripciones, participaciones, contribuciones y cuotas en algunos Organismos Internacionales de Desarrollo, así como el relativo a la subrogación de los créditos de Tabacalera, S.A., no figuran en el Balance, como se expone en el apartado I.2.2.2.D.5) de este Informe. El crédito singular correspondiente a la asunción por el Estado de la Deuda del FORPPA se encuentra incluido en la agrupación de préstamos asumidos.

[10] En este ejercicio, en el que se ha registrado un fortalecimiento continuado del tipo de cambio de la peseta respecto al dólar USA, la disminución del saldo vivo a 31/12/90 de los préstamos, concertados en esta divisa, supuso el 7,6% de su importe antes de la regularización.

[11] Ver apartado I.2.2.1.B.1) de este Informe.

E) Partidas pendientes de aplicación.

E.1) Anticipos del Banco de España pendientes de formalizar.

El detalle, en millones de pesetas, de los saldos de las cuentas que componen este epígrafe, que son contrapartida de las correspondientes que figuran en la agrupación de cuentas financieras[41], es el siguiente:

- Pagos de Deuda Pública	252.237
- Pagos al exterior pendientes de aplicar. Diferencias de cambio obligaciones autopistas de peaje	16.690
- Pagos al exterior pendientes de aplicar (cuenta provisional)	5.969
TOTAL	274.896

Los pagos al exterior pendientes de aplicar por subvenciones de las diferencias de cambio obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, corresponden a los anticipos efectuados por el Banco de España en los años 1989 y 1990, según se detalla en el apartado I.2.1.1.A.11) de este Informe.

Los 5.969 millones de pesetas de la cuenta provisional, corresponden a los anticipos efectuados por el Banco de España en los meses de noviembre y diciembre de 1990, a los que se ha hecho referencia en el apartado I.2.2.1.F.1).

E.2) Ingresos en c/c restringidas y acreedores por pagos en firme y a justificar.

No se recogen en el Balance las cuentas correspondientes a este epígrafe que son contrapartida de las que debían figurar en la agrupación de cuentas financieras, como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado I.2.2.1.E).

I.2.2.3.- Cuentas de control presupuestario y de orden.

A) Compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios posteriores.

El detalle de los compromisos de gasto adquiridos con cargo al ejercicio 1990 y siguientes, en virtud de la autorización concedida en el artículo 61 del TRLGP, se recoge en el anexo I-4, de acuerdo con los datos que aparecen en la Cuarta Parte de la Cuenta General rendida.

Del análisis realizado de estos compromisos no se deduce la existencia de anomalías legales o contables dignas de mención.

B) Anticipos de tesorería.

Los saldos de las cuentas correspondientes al control de los anticipos de tesorería concedidos son objeto de desarrollo en la Tercera Parte de la Cuenta General. En el anexo I-5 se detalla su evolución y situación, de cuyo análisis se deducen las siguientes observaciones:

- Los anticipos de tesorería concedidos al Ministerio de Defensa deberían haberse cancelado totalmente, como se ha puesto de manifiesto en los apartados I.2.1.1.A.2) y I.2.1.1.A.3) de este Informe.

En 31/12/90 ha quedado un saldo de obligaciones pendiente de cancelar en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 415 millones de pesetas, correspondientes al anticipo de tesorería concedido para completar el pago a la "Cía. Transmediterránea, S.A." de las bonificaciones aplicadas durante el año 1988 en las tarifas de determinados pasajes marítimos. El crédito extraordinario para la cancelación de este anticipo fue concedido por la Ley 13/1991, de 29 de abril.

C) Avales.

El art. 110 del TRLGP establece que el importe total de los avales otorgados no podrá exceder del límite que en cada ejercicio señale, para el Estado y para cada Organismo autónomo, la LPGE. Para el ejercicio 1990 se señala exclusivamente, como viene siendo tradicional, el límite máximo de los avales a prestar durante el ejercicio, fijándolo en 175.000 millones de pesetas[42], que se ha respetado.

En los anexos I-8.1 a I-8.4 se resumen los estados del movimiento y situación de los avales concedidos por el Tesoro Público que acompañan a la Cuenta General del Estado.

En el siguiente cuadro se recoge la situación de los avales concedidos por el Tesoro (saldos disponibles) clasificados por sectores en millones de pesetas:

SECTORES	SALDO 31/12/90	SALDO 31/12/89	DIFERENCIA
I. TRANSPORTES			
- Autopistas	72.795	81.281	(8.486)
- Renfe	122.536	161.816	(39.280)
II. OTROS			
- EEUU de Méjico	7.574		7.574
TOTAL	202.905	243.097	(40.192)

La diferencia entre los saldos disponibles en fin de ambos ejercicios se desglosa como sigue:

	IMPORTE
- Diferencia entre dispuesto y cancelado en moneda extranjera	(29.344)
- Diferencia por variación del tipo de cambio	(10.848)
TOTAL	(40.192)

Como en ejercicios anteriores, el estado rendido incluye, exclusivamente, los riesgos por principales avalados, sin hacer mención alguna a la carga financiera de los correspondientes créditos.

I.2.3.- RESULTADOS

I.2.3.1.- Resultados del ejercicio.

En el anexo I-6 se detallan los resultados del ejercicio distinguiéndolos, según su procedencia, en resultados corrientes del ejercicio, resultados extraordinarios, resultados de la cartera de valores y modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores.

A) Resultados corrientes del ejercicio.

Desde un punto de vista formal, las partidas que conforman los "Resultados corrientes del ejercicio" se deducen de las correspondientes de la liquidación presupuestaria, con las excepciones dispuestas por la normativa contable aplicada, según se especifica en el anexo I-7.1.

El importe que figura en la Cuenta rendida como pérdida por este concepto es de 447.785 millones de pesetas. A lo largo de este Informe, y en especial en el apartado dedicado a la liquidación presupuestaria, se han puesto de manifiesto una serie de operaciones mal contabilizadas, indebidamente periodificadas, o sin contabilizar que, según se recoge en el anexo I-7.2, suponen una minoración indebida de las pérdidas corrientes del ejercicio presentadas en cuentas de 159.406 millones de pesetas o de 55.300 millones, si se hubieran periodificado los intereses de los Pagarés y Letras del Tesoro con una incidencia neta negativa en los resultados de 95.494 millones de pesetas, según se recoge en el anterior apartado I.2.2.2.D.3) y las devoluciones de impuestos, ya que el ejercicio 1990 soportó 326.000 millones de pesetas[43] por el concepto de devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al IRPF-88, frente al diferimiento de 126.400 millones a que se hace referencia en el anterior apartado I.2.1.4.b).*

B) Resultados extraordinarios.

El importe de las pérdidas correspondientes a "Resultados extraordinarios" que figura en la Cuenta rendida asciende a 96.594 millones de pesetas, formulándose las siguientes observaciones:

a) Las pérdidas de Deuda Pública corresponden en su mayor parte -34.760 millones de pesetas- a primas de emisión de Bonos y Obligaciones del Estado[44].

b) Los resultados positivos en la enajenación de los metales preciosos -6.664 millones de pesetas- se producen como consecuencia de la venta al Banco de España de todo el oro y la plata de los que el Estado era titular, en virtud de la autorización concedida por el artículo 55 de la Ley de Presupuestos para 1990. Por otra parte, en el debe de la cuenta de resultados extraordinarios figura una partida de 1.135 millones de pesetas como "minusvalía metales preciosos", que compensa, en parte, el beneficio anteriormente señalado, al tratarse de las plusvalías netas por regularización del valor de los metales preciosos contabilizadas en ejercicios anteriores y cuyo saldo figuraba en la agrupación general de patrimonio y reservas.

c) La pérdida neta de 235 millones de pesetas por préstamos concedidos a funcionarios es consecuencia del incorrecto procedimiento contable utilizado para reflejar las operaciones relativas a estos préstamos, puesto de manifiesto en anteriores Informes y al que se ha hecho referencia en el apartado I.2.2.1.E) anterior.

[41] Ver cuentas 572.7 y 572.8 incluidas en el apartado A) del Anexo I-3.2

[42] Art. 9.1 RDL 7/1989, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria.

[43] Datos de la Memoria de la Administración Tributaria.

[44] Este procedimiento contable, que es el establecido en el PGCP, hace recaer en el ejercicio de emisión una pérdida que pudiera repartirse a lo largo de la vida del empréstito, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

d) Por último, como se ha expuesto en el punto I.2.2.1.B.1) de este Informe, la pérdida de 70.037 millones de pesetas ha sido contabilizada como consecuencia de la regularización producida a la entrada en vigor de la Instrucción de Cartera de Valores, para modificar la incorrecta valoración de esta cuenta. Sin embargo, dicha regularización debería haberse efectuado únicamente por 57.495 millones, de los cuales 14.136 corresponden a resultados de la cartera de valores no contabilizados en ejercicios anteriores.

C) Resultados de la cartera de valores.

Bajo la rúbrica general de "resultados negativos en la enajenación de acciones" se recogen tanto los positivos, que ascienden a 601 millones de pesetas, como los negativos, cuyo importe fue de 21.580 millones.

El importe de los resultados negativos se produjo como consecuencia de la venta por 200 millones de pesetas de todas las acciones propiedad del Estado de "Hilaturas y Tejidos Andaluces S.A." e "IMEPIEL, S.A."[45], tras haberse procedido a la suscripción de las ampliaciones de capital llevadas a cabo en el ejercicio para el saneamiento financiero de dichas sociedades por importes de 4.300 y 8.500 millones de pesetas, con lo que el valor en cuentas de estas sociedades pasó a ser de 11.238 y 10.542 millones, respectivamente. Estas operaciones, instrumentadas presupuestariamente a través del capítulo 8 del presupuesto de gastos "Variación de activos financieros", al realizarse en el mismo ejercicio que la venta, deberían ser consideradas como un "resultado corriente del ejercicio" más que ser imputables a "resultados de la cartera de valores[46]".

D) Modificación de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores.

Las pérdidas producidas en el ejercicio 1990 como consecuencia de "modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores" ascienden a 83.488 millones de pesetas.

En relación con las partidas que componen este saldo se formulan las siguientes observaciones:

- El importe de las anulaciones y bajas de derechos reconocidos en ejercicios anteriores, que afectan a esta cuenta, ascienden a 91.713 millones de pesetas y las prescripciones de obligaciones reconocidas a 7.989 millones.

- Entre los cargos de esta cuenta figuran 773 millones de pesetas por aumentos del saldo de obligaciones, que provienen, en parte, de errores contenidos en órdenes de pago y que quedan compensados con ingresos efectuados en "Resultados corrientes del ejercicio" "Otros ingresos", según el procedimiento establecido para la corrección de los citados errores.

I.2.3.2.- Operaciones pendientes de regularización.

En el anexo I-7.2 se recogen los importes de las operaciones correspondientes a ejercicios anteriores a 1990, que no han sido regularizados.

Estas partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o incorrectamente aplicadas en 31/12/90 y que habrán de regularizarse con cargo a las cuentas de resultados en ejercicios posteriores, ascienden a 470.544 millones de pesetas, que junto con el cargo de 159.406 millones, correspondiente al ejercicio 1990, a que se refiere el apartado I.2.3.1.A) anterior, importan un total neto de 629.950 millones de pesetas. A este importe habría que añadir 791.752 millones (895.858 de ejercicios anteriores y -104.106 del ejercicio 1990), que corresponden a los intereses de Pagarés y Letras del Tesoro devengados a la indicada fecha y pendientes de vencimiento y a las devoluciones de impuestos que han sido imputadas a ejercicios distintos a los que les corresponde, lo cual implica que el importe global de las operaciones pendientes de regularización, que habrán de soportar las cuentas de resultados de ejercicios posteriores, ascienda a 1.421.702 millones de pesetas.

Todo ello sin perjuicio del desplazamiento temporal de resultados producido como consecuencia de los déficit de RENFE, a que se refiere el apartado I.2.1.3 de este Informe, así como la regularización de los préstamos que se consideran incobrables, reseñados en el apartado I.2.2.1.B.2), relativos al seguro de crédito a la exportación.

I.3.- CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS.

En este apartado se presentan los resultados del examen y comprobación de las cuentas de los Organismos autónomos administrativos (OAA) integrados en la Cuenta General del Estado (CGE), cuya relación completa aparece en el anexo I-9.1, estructurándose la exposición en los tres apartados siguientes:

- **Liquidación de los presupuestos.** Recoge las incidencias detectadas en la ejecución presupuestaria, así como en los resultados que se derivan de ella.

- **Balance de situación.** En esta parte se expresan las observaciones relativas a las distintas cuentas que configuran la situación patrimonial de los citados Organismos.

- **Resultados.** Recoge la composición de los mismos y las excepciones por las que se ven afectados.

Las cuentas rendidas, en general y desde un punto de vista formal, son aritméticamente correctas e internamente consistentes, y se ajustan a lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad de los Organismos autónomos del Estado. No obstante, existen excepciones que se expondrán en los párrafos posteriores, unas que se consideran importantes y afectan a Organismos determinados y otras de menor relevancia pero más extendidas entre los Organismos.

Entre las excepciones citadas como más importantes se encuentran las siguientes:

A) El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), al igual que en ejercicios anteriores, realiza operaciones contables por importes significativos que afectan a las cuentas de inmovilizado material, inmovilizado financiero, patrimonio y resultados pendientes de aplicación sin ajustarse a lo señalado en la Instrucción de Contabilidad y su propia adaptación específica.

Entre dichas operaciones destacan las siguientes:

- Afloración de activos con abono a resultados pendientes de aplicación por un importe de 11.043 millones de pesetas para, posteriormente, cancelar dichos activos con cargo a "Patrimonio" o a "Patrimonio entregado al uso general".

- Cancelación del saldo final de la cuenta de "Resultados pendientes de aplicación" con cargo a "Inmovilizado para su cesión", por importe de 59.318 millones de pesetas.

- Traspaso de inmovilizado a Comunidades Autónomas con cargo a Patrimonio, por importe de 382 millones de pesetas.

- Conversión de inmovilizado material en inmovilizado financiero, por importe de 1.223 millones de pesetas.

- Incorporación a patrimonio de las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio anterior, por importe de 35.831 millones de pesetas, sin justificación suficiente.

Asimismo, el Organismo carece de inventario de su inmovilizado material que alcanza un valor en cuentas de 168.761 millones de pesetas, y el registro auxiliar de su inmovilizado financiero, que asciende a 42.453 millones, presenta descuadres y errores.

B) La Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar no recoge en su contabilidad el inmovilizado construido con anterioridad a 1/1/88 ni su contrapartida de neto patrimonial, mientras que el relativo a los ejercicios siguientes aparece de forma inadecuada e incompleta. Por otra parte, no sigue lo establecido en su plan especial de adaptación al Plan General de Contabilidad Pública en lo referente al desglose y clasificación de su patrimonio y aplicación de las subvenciones de capital recibidas

C) El Organismo Fondo de Explotación de Servicios de la Cría Caballar y Remonta no aporta el balance de sumas y saldos ni otros anexos exigidos por la contabilidad patrimonial, debido a que no aplica el preceptivo sistema de partida doble.

D) La Gerencia de Infraestructura de la Defensa continúa incumpliendo lo dispuesto en su plan especial de adaptación al Plan de Contabilidad Pública, aun teniendo en cuenta las reformas a efectuar en aquél de acuerdo con la nueva normativa de contabilización de inmovilizado que entró en vigor en este ejercicio. En este sentido, entre otras cuestiones, destaca la falta de registro contable de los bienes de inmovilizado material que gestiona, precisamente la función para la que fue creado como Organismo autónomo.

E) (Suprimido por la aceptación de las alegaciones del Gobierno).

F) El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia del Aceite de Oliva presentan en sus balances de situación unas cifras de resultados del ejercicio que no coinciden con los saldos de la correspondiente cuenta, debido, en ambos casos, al incorrecto tratamiento contable dado a los resultados del ejercicio. Este descuadre se traslada a los estados anuales agregados, como se observa en los anexos I-10 (balance) y I-11 (cuenta de resultados) -transcripción de la información de aquéllos- en los que los resultados del ejercicio aparecen por importes de 43.186 y 44.731 millones de pesetas, respectivamente.

G) La Organización de Trabajos Portuarios (OTP), sigue realizando operaciones de ejercicios cerrados y consiguientemente rindiendo cuentas de las mismas, a pesar de que de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/86, de 23 de mayo, al inicio del ejercicio 1988 ya debería haberse extinguido, porque, aun siendo cierto que la disposición transitoria 1ª establece la extinción del Organismo una vez constituidas las sociedades estatales, la

[45] Es de destacar, que en el caso de la venta de IMEPIEL, los compradores exigen garantías sobre las posibles exigencias por parte de la CEE, en virtud del procedimiento abierto por la Comisión Europea, respecto a las ampliaciones de capital realizadas entre 1986 y 1988 y las relativas a la de este ejercicio que ha sido comunicada a dicha Comisión y sobre la que no se ha recibido respuesta. El Acuerdo de Consejo de Ministros, correspondiente a la ampliación de capital y venta de IMEPIEL, recoge expresamente en su apartado V punto D "... siendo de cuenta del vendedor cualquier contingencia sustancial que pudiese aparecer a la fecha de dicho balance (el de la escritura de compraventa) o referida a actos o hechos anteriores a la escritura de compraventa". Por otra parte, en el caso de la venta de HYTASA, el Acuerdo de Consejo de Ministros hace referencia a la comunicación a la Comisión Europea de la ampliación de capital y a la autorización para la suscripción, desembolso y compra-venta posterior de la empresa, sin esperar a recibir la respuesta comunitaria. No obstante, no se encuentra en dicho Acuerdo ninguna prevención similar a la referida a IMEPIEL por parte de sus compradores.

[46] El automatismo del SICOP no debe ser obstáculo que impida la representatividad de la cuenta rendida.

adicional 2ª fija como plazo máximo de aquélla el de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley (28 de mayo de 1986)[47].

H) El Instituto de Relaciones Agrarias (IRA) presenta el balance de situación descuadrado en 861 millones de pesetas, como consecuencia de la falta de reflejo de deudores y acreedores presupuestarios por importes de 1.591 y 730 millones de pesetas, respectivamente. La diferencia se subsana con un anejo al balance con firma sin identificar.*

Se considera que las cuentas de los Organismos referidos en los anteriores apartados A) a D) y F) no deberían haber sido incluidas en los estados agregados hasta que no se hubieran subsanado los defectos señalados, que este Tribunal considera graves.*

Con independencia de lo expresado en los párrafos anteriores, un gran número de Organismos presentan otras deficiencias e incorrecciones en relación básicamente con la información complementaria -anexos a los estados anuales y soportes justificativos- destacando:

a) La falta de remisión de algunos documentos preceptivos, principalmente del informe sobre objetivos, costo y productividad de los servicios, del estado de composición del inmovilizado y del pasivo exigible a medio y largo plazo, y del registro general de tesorería.

b) Carencia del detalle informativo exigido para alguno de los documentos remitidos, particularmente para las relaciones de acreedores y deudores, así como incorrecciones y falta de uniformidad en el contenido de alguna de las partes que componen el cuadro de financiamiento anual, referido al estado de origen y aplicación de fondos y estado de tesorería.

c) Insuficiente aclaración de las causas que motivan las modificaciones de derechos u obligaciones de presupuestos cerrados.

Finalmente hay que señalar, que los criterios seguidos en el diseño de los programas informáticos del SICAI impiden recoger en el balance los compromisos de gasto con cargo al ejercicio 1991 que deben aparecer en el balance cerrado a 31/12/90.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la fiscalización llevada a cabo sobre el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se recogen en el apartado III.1 de este Informe, se considera que la cuenta rendida por el Organismo no representa la imagen fiel de su situación patrimonial a 31/12/90, especialmente en lo relativo a inmovilizado, existencias, tesorería, acreedores extrapresupuestarios e ingresos. En esta parte, I.3, del Informe se hará mención al INE en los apartados más significativos, con independencia de su desarrollo más detallado en el punto referido en primer lugar.

I.3.1.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

En los anexos I-9.1 y I-9.2, se presenta la liquidación de los presupuestos del ejercicio correspondiente a los Organismos aquí considerados en su doble vertiente orgánica y económica. En ellos se observa que los gastos e ingresos del subsector, medidos por las obligaciones y derechos contraídos, ascienden a 1.852.531 y 2.045.131 millones de pesetas, representando, según se deduce del anexo I-1.1, el 11% de los gastos e ingresos totales del sector público estatal integrante de la CGE. Dichas obligaciones y derechos determinan un superávit de gestión presupuestaria de 192.600 millones de pesetas.

I.3.1.1.- Ejecución presupuestaria.

Las observaciones fundamentales en relación a la regularidad contable y legal de la ejecución presupuestaria de dichos Organismos son las que se indican a continuación:

A) Obligaciones reconocidas.

A.1) Prestaciones por desempleo del Instituto Nacional de Empleo (INEM).

Este Organismo mantiene, a 31/12/90, como "partidas pendientes de aplicación" sin regularizar presupuestariamente, 577.232 millones de pesetas, de los que 217.514 millones corresponden al ejercicio corriente y el resto a ejercicios anteriores, de acuerdo con el siguiente desglose:

- Ejercicio 1986	2.012
- Ejercicio 1987	105.409
- Ejercicio 1988	69.811
- Ejercicio 1989[48]	182.486
TOTAL	359.718

A.2) Cuotas, prestaciones y otros gastos de FOGASA.

Como ya se puso de manifiesto en la introducción a este epígrafe general, FOGASA rinde sus cuentas sin incluir y, por tanto, sin aplicar a presupuesto, ingresos y gastos del ejercicio por importe de 8.364 y 12 millones de pesetas, respectivamente.

Por otra parte, aplica en el ejercicio 3.687 millones de pesetas de gastos presupuestarios correspondientes a ejercicios anteriores.

A.3) Inversiones financieras temporales del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

El ISFAS presenta un saldo a 31/12/90 en su cuenta de inversiones financieras temporales de 12.762 millones de pesetas, -frente a 11.502 millones en 31/12/89- por fondos públicos adquiridos extrapresupuestariamente en el ejercicio y con vencimiento en 1991. Este Organismo debería haber realizado sus operaciones de inversión a corto plazo presupuestariamente.

Por otra parte mantiene como deudores extrapresupuestarios pendientes de regularizar a 31/12/90, 3.871 millones de pesetas por anticipos de diversos gastos de carácter presupuestario, de los que 2.317 millones están pendientes de aplicar a presupuesto y el resto, 1.554 millones, están aplicados -1.383 en 1990 y 171 en 1988- pero permanecen pendientes de pago y por tanto de cancelar. A 31/12/90 el importe pendiente ascendía a 3.708 millones de pesetas, en el que se incluían los 171 millones anteriores.

A.4) A 31/12/90 el INE tiene una deuda con la Seguridad Social pendiente de contabilizar y aplicar a presupuesto por importe de 1.876 millones de pesetas, de los que 1.178 corresponden a 1989 y 698 a 1990.

La práctica contable expuesta en los anteriores apartados A.1) a A.4) supone el incumplimiento del art. 49 de la TRLGP que exige la imputación al presupuesto del ejercicio de las obligaciones reconocidas y derechos liquidados correspondientes a gastos e ingresos realizados dentro del mismo. No se acepta la alegación relativa a los gastos del INEM. Entre otras razones, porque la necesidad de mayor crédito presupuestario es conocida al tramitar el anteproyecto de presupuesto de cada año y, aunque así no fuese, insuficiencias tan importantes sin duda podrían preverse en el transcurso del ejercicio con gran antelación al devengo de los gastos.*

B) Derechos reconocidos.

B.1) Transferencias del Estado.

Entre los desajustes contables por operaciones de transferencia puestos de manifiesto en el apartado I.1.2 anterior, se han señalado una serie de salvedades a la exactitud de las cifras de derechos reconocidos en el ejercicio y a las de pendientes de cobro a 31/12/90, destacando, por su importe, las correspondientes al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y al INE que contabilizan como derechos reconocidos en el ejercicio 5.453 y 1.460 millones de pesetas, respectivamente, que corresponden a remanentes de crédito anulados por el Estado, y al ISFAS que contrae, en 1990, 211 millones de pesetas correspondientes a los déficit en el ejercicio de las Mutualidades AMBE Y AMBA, que el Estado subvenciona en 1991.

Por otra parte, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo recoge en el capítulo 3 de su presupuesto de ingresos, en concepto de reintegros, transferencias corrientes contraídas por el Estado en el ejercicio anterior, por importe de 1.757 millones de pesetas. La afloración contable de esta operación debió hacerse mediante la cuenta de Modificación de derechos de ejercicios anteriores y no a través de la aplicación presupuestaria de reintegros del ejercicio.

B.2) Ingresos aplazados.

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa aflora en 1990, con aplicación a su presupuesto, derechos por ventas a plazo y convenios efectuados en ejercicios anteriores, de los que a 31/12/90 quedan pendientes de vencimiento 9.992 millones de pesetas.

El Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial incluye como derechos reconocidos en el ejercicio 175 millones de pesetas, correspondientes a cobros aplazados a ejercicios posteriores.

En ambos casos la aplicación al presupuesto del ejercicio de las cantidades no vencidas es improcedente.

B.3) Otros ingresos.

El Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa aplica indebidamente a su presupuesto de ingresos en el ejercicio, 846 millones de pesetas correspondientes al saldo de los fondos de atenciones generales de distintas regiones militares que fueron previamente aplicados a presupuesto en el ejercicio 1989. La duplicación, que no tiene repercusión en la tesorería del Organismo, fue detectada e intentada corregir de forma inadecuada, por lo que sus efectos sobre la liquidación presupuestaria permanecen en la cuenta rendida.

Por otra parte, FOGASA aplica al capítulo 3 "Intereses" en vez de al capítulo 9 "Variación de pasivos financieros" de su presupuesto de ingresos, 4.322 millones de pesetas correspondientes a amortización de Deuda Pública.

I.3.1.2.- Resultados de gestión presupuestaria.

Los resultados de gestión presupuestaria de los OAA en el ejercicio 1990, diferencia entre los derechos y obligaciones reconocidos en

[47] Recientemente la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado, establece en su disposición transitoria tercera, el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, para la constitución de las Sociedades estatales pendientes de constituir.

[48] Por ajustes efectuados en el ejercicio se considera que la cifra de prestaciones pendientes de aplicar correspondientes a 1989 asciende a este importe.

el ejercicio, ascienden como se observa en el anexo I-1.1 a 192.600 millones de pesetas y presentan el siguiente detalle (en millones de pesetas):

	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	SUPERÁVIT (DÉFICIT)
Operaciones corrientes	1.746.886	1.631.344	115.542
Operaciones de capital	282.030	204.430	77.600
Operaciones financieras	16.215	16.757	(542)
TOTAL	2.045.131	1.852.531	192.600

Existen grandes diferencias entre los resultados de gestión presupuestaria de los distintos Organismos tanto en signo como en cuantía: hay 27 Organismos que tienen superávit y 6 que tienen déficit. Entre los primeros destacan INEM, IRYDA, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, Gerencia de Infraestructura de la Defensa, Consejo Superior de Deportes, Jefatura de Tráfico, ISFAS, Fondo Central de Atenciones Generales de la Defensa, INE e IRA, con 163.398, 7.725, 6.822, 4.347, 4.118, 3.964, 3.383, 2.159, 1.632 y 1.515 millones de pesetas, y entre los segundos Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) Y FOGASA, con 5.814 Y 4.159 millones de pesetas, respectivamente.

Estos resultados -tanto los agregados como los de los Organismos concretos- son los que aparecen en las cuentas rendidas; sin embargo, en el caso de que se hubieran aplicado correctamente las normas presupuestarias y contables respecto a las operaciones indicadas anteriormente, tales resultados aumentarían en el caso de FOGASA en 12.039 millones de pesetas y en los casos de INEM, Gerencia de Infraestructura de la Defensa, Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, ISFAS, INE, Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa e Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, disminuirían en 217.514, 9.992, 5.453, 251, 2.158, 846, y 175 millones de pesetas respectivamente, como consecuencia de las anomalías puestas de manifiesto en los apartados I.3.1.1.A.2), A.1), A.4), B.1), B.2) y B.3) anteriores, con lo que INEM y Gerencia para la Infraestructura de la Defensa pasarían a tener déficit por importes de 54.116 y 5.645 millones de pesetas, respectivamente.*

Asimismo, el importe neto agregado del subsector disminuiría en 226.107 millones de pesetas, pasando a presentar un déficit global de 33.507 millones de pesetas.*

No procede aceptar la alegación en relación con cómo quedarían afectados los resultados del INEM en el caso de aplicación presupuestaria de los gastos no imputados, por cuanto que se trata de una mera hipótesis de su financiación.

I.3.1.3.- Excepciones y salvedades a los gastos e ingresos aplicados al presupuesto hasta 31/12/90.

En el cuadro que figura a continuación se detallan, en millones de pesetas, los gastos e ingresos que no han sido aplicados al presupuesto o lo han sido de forma incorrecta y que por ello se encuentran pendientes de regularizar en 31/12/90, haciéndose referencia a los apartados anteriores en que se describen estas anomalías.

REFª. APTDº.	CAUSA Y CONCEPTO (en millones de pesetas)	AUMENTO (DISMINUCIÓN) RDOS. LIQ. PPTARIA.	
	GASTOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		(594.199)
A.1	Prestaciones Desempleo INEM	(577.232)	
A.2	Gastos FOGASA	(12)	
A.3	Inversiones financiera y otros gastos ISFAS	(15.079)	
A.4	Cuotas a la Seguridad Social del INE	(1.876)	
	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN O APLICADOS EN EXCESO		(8.927)
A.2	Cuotas pendientes de FOGASA	8.364	
B.1	Transferencias del Estado a diversos Organismos	(7.124)	
B.2	Ingresos aplazados	(10.167)	
	TOTAL		(603.126)*

Así pues, en el caso de que los principios que informan la contabilidad pública se hubieran aplicado adecuadamente, las liquidaciones presupuestarias de los correspondientes ejercicios deberían haber recogido, en su caso, las operaciones a que se refiere el cuadro anterior.

La regularización por un importe conjunto de 592.748[49] millones de pesetas, habrá sido o deberá ser soportada por ejercicios posteriores a 1990.*

[49] Importe total del cuadro, descontados los 10.167 millones de pesetas de ingresos aplazados, aplicados anticipadamente y los 211 millones de pesetas contraídos por el ISFAS correspondientes a subvenciones de 1991.*

I.3.1.4.- Remanentes de tesorería a 31/12/90.

El remanente de tesorería a 31/12/90 presenta un saldo agregado, según las cuentas rendidas, de 752.099 millones de pesetas, si bien esta cifra está indebidamente incrementada en los 603.126 millones de pesetas a que se hace referencia en el apartado anterior, por lo que su regularización determinaría que fuese realmente de 148.973 millones de pesetas.*

Asimismo los remanentes de tesorería en 31/12/90 de INEM, FOGASA, ISFAS, Gerencia de Infraestructura de la Defensa, Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, INE e Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, que según las respectivas cuentas ascienden a 484.726, 42.873, 28.231, 6.816, 16.957, 1.632 y 484 millones de pesetas, pasarían a estar realmente cifrados en -92.506, 51.225, 12.941[50], (3.176), 11.504, -1.704 y 309 millones, respectivamente.*

Respecto de las alegaciones al ajuste del remanente del ISFAS, por una parte véase lo dicho en I.3.1.1.A.3; y por otra, se ratifica que la incidencia neta total de las inversiones financieras en dicho remanente es de 12.762 millones de pesetas, saldo de ellas a 31/12/90, dado que en ningún momento se aplicaron a presupuesto las operaciones de inversión y desinversión.

Un elemental análisis de las cuantías absolutas y relativas de los remanentes de tesorería pone de manifiesto la excesiva fortaleza financiera de algunos Organismos, hecho que no está justificado toda vez que, en general, estas Entidades, atendida su naturaleza, deberían presentar una situación de equilibrio financiero. Prescindiendo del caso especial de las Mutualidades, hay tres Organismos, Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y Agencia para el Aceite de Oliva, en los que el importe de su remanente de tesorería es superior al total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio y otros diez más, Centro de Estudios Judiciales, Fondo de Atenciones Generales del Servicio Geográfico del Ejército, Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, Jefatura de Tráfico, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, Fondo de Garantía Salarial, SEA, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto de Cinematografía y Artes audiovisuales y Centro de Estudios Constitucionales, en que es superior al 50%.

Una de las causas de estos excedentes financieros se debe al inadecuado tratamiento presupuestario del remanente de tesorería, que debe constituir la primera partida de financiación de los OAA y como tal aparece reflejado en el artículo 87 de sus presupuestos de ingresos, siendo exigible, por tanto, su rigurosa previsión y utilización prioritaria respecto a las transferencias del Estado para financiar las modificaciones de crédito.

Sin embargo se observa que hay varios Organismos que no consignan su remanente de tesorería por los importes razonablemente previsibles en el momento de elaborar sus presupuestos, sino muy alejados de ellos, en la mayoría de los casos por defecto. Así un grupo de 23 Organismos[51] dan como previsión inicial agregada 26.806 millones de pesetas frente a los 154.033 realmente realizados, si bien posteriormente utilizan vía modificaciones, otros 59.011 millones de pesetas.

Para seguir avanzando en la corrección de los actuales desequilibrios se hace necesaria una rigurosa presupuestación y utilización de los remanentes de tesorería, así como una ajustada política de transferencias entre el Estado y sus Organismos autónomos, haciendo el adecuado uso, en su caso, como mecanismo corrector de los excedentes financieros de éstos, de la condición de ampliables atribuida a los correspondientes créditos por las Leyes de Presupuestos[52].

I.3.2.- BALANCES DE SITUACIÓN.

En el anexo I-10 aparece el balance diferencial de situación agregado que compara las situaciones patrimoniales a 31/12/89 y 31/12/90[53].

I.3.2.1.- Activo.

A) Inmovilizado.

El saldo conjunto de las cuentas de inmovilizado a 31/12/90 asciende a 562.002 millones de pesetas de los que 330.295 corresponden a material, 9.476 a inmaterial, 71.619 a financiero y 150.612 a activo ficticio.

[50] Este importe no incluye los 12.762 millones de pesetas que el ISFAS mantiene en fondos públicos a corto plazo al haberse efectuado el ajuste correspondiente a la consideración presupuestaria de los mismos como gasto.

[51] No se incluyen las Mutualidades ni el Instituto Nacional de Empleo; en el primer caso por la especialidad de estos Organismos en orden a su remanente y en el segundo porque la inclusión de las cifras rendidas por el INEM, dadas su elevada cuantía absoluta y las excepciones y salvedades por las que se ve afectada -según lo expuesto en el apartado I.3.1.4 anterior- desvirtuaría el análisis.

[52] De acuerdo con el apartado 1.1.e) del anexo II de la Ley de Presupuestos del ejercicio 1990, son ampliables los créditos de transferencias al Estado que figuran en los presupuestos de gastos de los Organismos hasta el importe de los remanentes que resulten como consecuencia de la gestión de los mismos.

[53] Los datos referidos a 1/1/90 difieren de los presentados en el mismo anexo del Informe anual de 1989 como situación a 31/12/89, debido a la variación de los Organismos incluidos en uno y otro anexo. En el anexo I-10 de este Informe se recogen sólo los Organismos incluidos en los Estados anuales agregados correspondientes a 1990.

La variación global neta de estas cuentas en el ejercicio asciende a 205.499 millones de pesetas y sobre la misma y los saldos a 31/12/90 se realizan las siguientes observaciones:

a) El incremento del valor neto de los inmovilizados material e inmaterial -157.418 millones de pesetas- es el que se deduce de los motivos de cargo y abono ordinarios para estas cuentas, según la información rendida, con las siguientes excepciones:

- Hay Organismos que no activan partidas aplicadas al capítulo 6 del presupuesto, al considerarlas gastos corrientes, lo que pone de manifiesto una inadecuada clasificación presupuestaria de los créditos. En este caso se encuentran el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa y el Registro de la Propiedad Industrial, por importes de 17.015, 385 y 40 millones de pesetas, respectivamente. Por otra parte, el Organismo citado en primer lugar, activa gastos aplicados al artículo 22 de su presupuesto "Material de oficina no inventariable", por importe de 272 millones de pesetas.

- En este ejercicio se efectúan afloraciones o regularizaciones de inmovilizado en diversos Organismos. Así:

- El Museo del Prado incrementa su inmovilizado en 1.507 millones de pesetas, correspondientes a inversiones de los ejercicios 1986 y 1987, con abono a la cuenta de "subvenciones de capital", que, como ya se puso de manifiesto en Informes anteriores, no recogía las recibidas en los citados ejercicios.

- La Escuela de Hacienda Pública actualiza su inmovilizado que constaba en el balance por un valor simbólico, abonando incorrectamente la cuenta de "plusvalía de revalorización de activos" en vez de la de "patrimonio" como procedía[4]. El importe de la operación ascendió a 70 millones de pesetas.

- El Servicio de Vigilancia Aduanera da de baja en el ejercicio inmovilizado por importe neto de 365 millones de pesetas con cargo a "resultados extraordinarios", debido a "anulación de errores iniciales o rectificaciones incorrectas" por desajustes del inventario físico con el contable, situación puesta de manifiesto por este Tribunal en sucesivos Informes. Del citado importe al menos 334 millones corresponden a errores en la contabilización inicial, por lo que su contrapartida debió haber sido la cuenta de "patrimonio" y no una cuenta de resultados.

- MUFACE aflora contablemente amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores por importe de 1.593 millones de pesetas, con cargo a "resultados extraordinarios".

- El Fondo Central de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa aplica al capítulo 6 de su presupuesto, gastos efectuados en otros Centros del Ministerio de Defensa, por importe de 99 millones de pesetas, regularizando a fin de ejercicio el inmovilizado contable resultante con cargo a su cuenta de "patrimonio". Esta operación debió ser considerada como transferencia de capital al Estado.

- Como se ha hecho referencia en la introducción a este epígrafe I.3, el IRYDA realiza operaciones contables que afectan a su inmovilizado que no responden al Plan de Contabilidad Pública en vigor ni a su adaptación al Organismo.

- La Gerencia de Infraestructura de la Defensa da de alta en el ejercicio, con abono a la cuenta de "patrimonio en adscripción", inmovilizado por importe de 12.239 millones de pesetas correspondiente a los convenios y ventas a plazo aflorados a que se ha hecho referencia en el anterior apartado I.3.1.1.B.2). Por otra parte no recoge en cuentas el valor de los bienes de inmovilizado cuya gestión constituye su actividad, como ya se ha expresado en la introducción de este epígrafe I.3.

- De los 34 Organismos que en 31/12/90 presentan saldo en sus cuentas de inmovilizado material, no dotan amortizaciones 19, cuyos activos amortizables a la indicada fecha representan aproximadamente un 75% de los del subsector reflejado en cuentas.

b) Varios Organismos no recogen adecuadamente, en todo o en parte, su inmovilizado; así:

- El Centro de Estudios Constitucionales valora el inmueble que utiliza para su gestión en el importe simbólico de 1 pta.

- El Fondo de Atenciones Generales del Servicio Geográfico del Ejército y el Instituto Nacional del Consumo no reflejan contablemente los edificios que ocupan; en el primer caso por "coexistir confundido con el de Servicio Geográfico del Ejército" y en el segundo por ser producto de "una adscripción no formal", según manifestación expresa de ambos Organismos. En los dos casos aparecen, sin embargo, activadas en su balance como inmuebles e instalaciones, las inversiones de reposición de aquellos, lo que no se considera correcto, máxime cuando no se practican amortizaciones.

- El Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo no recoge los inmovilizados cuya adquisición fue anterior a 1987.

c) El Consejo Superior de Deportes tiene recogido en cuentas como inmovilizado material todos los gastos realizados con cargo al capítulo 6 de su presupuesto, aunque en múltiples casos la titularidad de los bienes no sea suya, por lo que la operación sería aplicable a la cuenta de resultados del Organismo y no una inversión activable en su balance. El Organismo alega que la aplicación al citado capítulo, que provoca la activación automática de estos gastos, se debe a que gestiona directamente la realización de las inversiones; sin embargo, al carecer del oportuno inventario y no hacer cesión formal de los bienes a su terminación, la cifra que aparece en su inmovilizado, que asciende a 12.442 millones de pesetas, carece de toda representatividad como activo para el mismo.

d) El saldo agragado del inmovilizado inmaterial corresponde a 10 Organismos, entre los que destaca el INE, con 7.993 millones de pesetas -84% del total-. Del citado importe, 3.233 millones corresponden a nóminas de personal contratado con cargo a proyectos de inversión que gestionadas a través de libramientos a justificar a las Delegaciones Provinciales, quedaron sin justificar al cierre del ejercicio y aproximadamente 1.400 millones de pesetas no se habían pagado a 31/12/90[5]; por otra parte, al menos 600 millones no se pueden imputar a proyecto alguno. Asimismo, analizados los gastos de publicidad que el Instituto Nacional del Consumo tiene activados bajo esta rúbrica, por importe de 119 millones de pesetas, sin movimiento desde 1987, al menos 82 millones son costes de edición de folletos o de publicación en medios que, en ningún caso, pueden ser considerados "propiedad intelectual" como alega el Organismo para su mantenimiento en cuentas. Únicamente dos Organismos de los 10 citados realizan las oportunas dotaciones a la amortización de estos activos.

La Jefatura de Tráfico activa como inmovilizado inmaterial en este ejercicio 1.019 millones de pesetas de los que 927 millones se recogen bajo la rúbrica de "otro inmovilizado inmaterial" y corresponden a los gastos de la campaña de divulgación de seguridad vial de 1990, por lo que debieron ser aplicados a su cuenta de resultados.

e) El 60% del inmovilizado financiero corresponde al IRYDA siéndole de aplicación las salvedades que se realizan en la introducción a este epígrafe I.3, en especial la de la falta de rigor de su registro auxiliar y la de sus movimientos no acordes con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.

f) El activo ficticio corresponde en su totalidad a la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar que, de acuerdo con su adaptación del Plan de Contabilidad Pública, contabiliza en esta Agrupación sus operaciones de inversión en bienes que van a ser cedidos con posterioridad, sin contraprestación. El importe que aparece en el balance, 150.612 millones de pesetas, corresponde a las inversiones realizadas en los ejercicios 1988, 1989 y 1990 y no ha sido objeto de baja alguna por cesión a sus destinatarios, al no realizarse, según alega el propio Organismo "cesiones formales". Por ello, la citada cuantía no es representativa de los bienes en curso pendientes de transmisión.

B) Deudores.

El saldo conjunto de las cuentas de deudores asciende a 335.724 millones de pesetas, de los que 212.823 corresponden a deudores por derechos reconocidos, 57.608 a otros deudores no presupuestarios y 65.293 a Entidades Públicas. En relación con estos saldos se observa que:

a) El importe de la cuenta de "deudores por derechos reconocidos" está sujeto a las salvedades que se derivan del contenido del apartados I.1.2, I.3.1.1.B.1) y B.2) anteriores, relativo a los desajustes contables por operaciones de transferencias internas y a la contracción indebida de cantidades aplazadas.

b) La cuenta "TGSS c/c" que FOGASA encuadra bajo la rúbrica de deudores no presupuestarios, con un saldo de 40.981 millones de pesetas, está infravalorada en los 8.352 millones de pesetas a que se hizo referencia en el anterior apartado I.3.1.1.A.2), correspondientes a cuotas y gastos del ejercicio.

El ISFAS tiene anticipos contabilizados como deudores no presupuestarios por importe de 3.871 millones de pesetas, de los que 1.554 millones son compensables con cargo a acreedores presupuestarios y el resto corresponde a gastos presupuestarios pendientes de aplicar, como se puso de manifiesto en el anterior apartado I.3.1.1.A.3).

c) El INEM mantiene en deudores no presupuestarios, "Entidades públicas", las cuentas de relación con la TGSS de los ejercicios 1987 y 1988 sin variación alguna, por un importe conjunto de 59.274 millones de pesetas.

En total, según la contabilidad del INEM, la TGSS le es deudora por 2.657 millones de pesetas -las cuentas de los ejercicios 85, 86, 89, 90 y la de bonificaciones a financiar por el INEM presentan un saldo acreedor conjunto de 56.617 millones de pesetas- en tanto que la TGSS reconoce una deuda a favor del INEM de 17.878 millones de pesetas, produciéndose una discrepancia entre ambos de 15.221 millones.

La citada situación de falta de conciliación y de no cancelación de saldos de ejercicios pasados se viene denunciando reiteradamente por este Tribunal y supone el riesgo de que el transcurso del tiempo y la acumulación de operaciones haga cada vez más difícil su aclaración.

[4] El propio Organismo señala que hará la oportuna corrección en las cuentas del ejercicio 1991.

[5] Ver apartado III.1.1.A) de este Informe.

En alegaciones se pretende justificar la falta de concordancia de saldos entre el INEM y la TGSS con la diferencia de las operaciones recogidas en las respectivas cuentas en razón a su fecha de contabilización, a lo que ha de oponerse que la contabilidad ofrece soluciones para la exacta correlación de saldos siempre que exista la debida coordinación entre los dos organismos, y que al menos sería exigible un estado de conciliación de diferencias que no se ha aportado por el INEM.

C) Cuentas financieras.

Según se observa en el anexo I-10 el saldo conjunto de estas cuentas en 31/12/90 asciende a 682.242 millones de pesetas, de los que 29.440 corresponden a inversiones financieras temporales, 577.774 a partidas pendientes de aplicación, 74.790 a caja, bancos e instituciones de crédito y 238 a Tesoro Público.

Del análisis de sus partidas se desprende:

a) El considerable aumento en relación con el ejercicio anterior de la cuenta "partidas pendientes de aplicación" es consecuencia, básicamente, del incremento de las partidas pendientes de aplicar a presupuesto en el INEM, por un importe a 31/12/90 de 577.232 millones de pesetas, como se pone de manifiesto en el apartado I.3.1.1.A.1) anterior.

b) FOGASA mantiene, como "partidas pendientes de aplicación" un saldo deudor con la TGSS por cargos pendientes de aclarar por 632 millones de pesetas que no es objeto de cancelación y cuyo importe se incrementa año tras año. Por otra parte, su cuenta 530 IFT "Fondos públicos" está sobrevalorada en 4.322 millones de pesetas, al haberse aplicado a la cuenta 780 "Otros ingresos" la amortización de unos títulos por dicho importe.

c) El INEM presenta un saldo acreedor en su cuenta con el Banco de España que asciende a 3.136 millones de pesetas, como consecuencia de la conciliación a 31/12/90 de operaciones en camino por importe de 30.076 millones de pesetas.

I.3.2.2.- Pasivo.

A) Patrimonio, reservas y resultados pendientes de aplicación.

Sobre los saldos de estas cuentas que a 31/12/90 ascienden a 424.227, 1.032 y 288.163 millones de pesetas, respectivamente, se realizan las siguientes observaciones:

El patrimonio global es el resultado, de acuerdo con la Resolución de 27/12/89 de la IGAE, de la suma algebraica de los importes positivos de patrimonio, 434.843 millones, y patrimonio cedido, 6 millones y negativo de patrimonio entregado al uso general, 10.623 millones de pesetas. El patrimonio cedido, que debía tener saldo negativo, corresponde al Centro de Estudios Judiciales que consignó, erróneamente, en esta cuenta lo que era patrimonio en cesión. El patrimonio entregado al uso general corresponde al IRYDA y su importe está sujeto a las salvedades referidas en el apartado A de la Introducción a este epígrafe I.3.

Asimismo, la representatividad del saldo de la cuenta de patrimonio está afectada por las observaciones realizadas en el anterior apartado I.3.2.1.A) relativo al inmovilizado. En el caso de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar se observa que no incorpora el importe de las subvenciones de capital recibidas que por importe de 150.612 millones de pesetas han sido objeto de inversión en los ejercicios 1988, 1989 y 1990, contraviniendo lo dispuesto en su plan especial de adaptación al Plan General de Contabilidad Pública. Tampoco, como se refirió en el citado apartado I.3.2.1.A), dicho importe se ha depurado por el correspondiente a las inversiones cedidas.

Por otra parte y en general, se observa falta de uniformidad de criterios por parte de los distintos Organismos en el tratamiento clasificatorio de sus netos patrimoniales.

B) Subvenciones de capital.

El saldo de esta cuenta a 31/12/90 asciende a 529.891 millones de pesetas, habiendo experimentado un incremento en el ejercicio de 235.662 millones de pesetas, según se desprende del anexo I-10. En relación con ambos importes se realizan las siguientes observaciones:

a) El saldo a 31/12/90 de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar -186.376 millones de pesetas- es únicamente comprensivo de las recibidas en los ejercicios 1988, 1989 y 1990 y se halla incrementado indebidamente en las inversiones de este periodo -150.612 millones de pesetas- como se ha hecho referencia en el anterior apartado I.3.2.2.A). Asimismo, el saldo incluye 4.718 millones de pesetas correspondientes a una transferencia del Estado del ejercicio 1989 que fue declarada "no disponible" y debió ser dada de baja en esta cuenta y no aplicarse a "Modificación de derechos de ejercicios anteriores" al anular el contraído, como realizó el Organismo.

b) El Museo del Prado y el Instituto Nacional del Consumo anulan derechos de ejercicios anteriores por transferencias de capital con cargo a "Modificación de derechos de ejercicios anteriores" y no a esta cuenta como correspondería, por importe de 100 y 3 millones de pesetas, respectivamente.

c) La Escuela de Hacienda Pública considera como subvenciones de capital 127 millones de pesetas que el Estado abonó como transferencias corrientes con la consiguiente sobrevaloración de esta cuenta y minoración de resultados.

C) Deudas a largo, medio y corto plazo y partidas pendientes de aplicación.

Según se observa en el anexo I-10 las deudas a medio y largo plazo se elevan a 31/12/90, a 44.324 millones de pesetas, de los que 44.275 millones corresponden a endeudamiento del IRYDA.

Las deudas a corto plazo ascienden a 223.026 millones de pesetas, y se desglosan en acreedores por obligaciones reconocidas -138.455 millones-, acreedores por pagos ordenados -18.808 millones-, Entidades públicas -41.940 millones-, otros acreedores no presupuestarios -23.821 millones- y acreedores por devolución de ingresos -2 millones-.

El INEM es el Organismo que presenta el saldo más elevado en esta agrupación, 141.843 millones de pesetas, compuesto en su mayor parte por cuentas de relación con la TGSS a las que son de aplicación las consideraciones efectuadas en el apartado I.3.2.1.B) anterior, y por "acreedores por obligaciones reconocidas", por importe de 50.000 millones de pesetas a favor del Estado, correspondientes al ejercicio 1987[46].

El CSD mantiene como "acreedores por obligaciones reconocidas" 311 millones de pesetas correspondientes a contraídos excesivos del ejercicio 1986.

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria mantiene a 31/12/90 las cuentas de "Estado Cta. de Aportación" por 468 millones de pesetas y "Ayuntamientos Cta. de Aportación" por 522 millones de pesetas, correspondientes al régimen de financiación anterior a 1989 que debieron aplicarse al presupuesto de ingresos o, en el caso de no corresponderse con gastos efectivos de aquel período, devolverse a los correspondientes partícipes, de acuerdo con la normativa en vigor en aquella fecha.

El saldo agregado en la cuenta "partidas pendientes de aplicación", en 31/12/90, asciende a 26.163 millones de pesetas, de los que 19.850 millones corresponden a un débito del INEM que, procedente de un exceso de financiación recibida por el Organismo con cargo a la Ley 3/1983, está pendiente de reintegro, como ya se ha puesto de manifiesto en Informes anteriores.

I.3.2.3.- Cuentas de orden y control presupuestario. Gastos con cargo a ejercicios futuros.

El importe de las autorizaciones y compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros asciende en 31/12/90 a 104.542 millones de pesetas según la información rendida por los Organismos; sin embargo, en determinados balances de situación se omiten los compromisos relativos al ejercicio 1991 por un importe de 45.112 millones de pesetas, de los cuales 21.312 corresponden al IRYDA. Esta omisión es consecuencia de la aplicación del SICAI según se ha hecho referencia al final de la introducción a este apartado I.3.

Con excepción de lo expuesto en el párrafo anterior, no se han observado anomalías reseñables en relación con las autorizaciones y compromisos que nos ocupan, detallándose a continuación, a título meramente informativo, el pormenor por años y capítulos de los mismos en millones de pesetas:

	1991	1992	1993	1994 y SS	TOTAL
Capítulo 2	435	240	89	86	850
Capítulo 3	1.525	940	940	3.760	7.165
Capítulo 6	53.638	14.837	4.034	--	72.509
Capítulo 7	11.663	8.824	3.349	182	24.018
TOTAL	67.261	24.841	8.412	4.028	104.542

I.3.3.- RESULTADOS.

I.3.3.1.- Resultados del ejercicio.

Según se observa en el anexo I-11, la cuenta de resultados del ejercicio presenta un saldo agregado acreedor de 44.731[47] millones de pesetas. Dicho saldo se deriva de beneficios en resultados corrientes del ejercicio por 52.492 millones de pesetas y pérdidas extraordinarias, en cartera de valores y en modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores por 2.878, 1.049 y 3.834 millones de pesetas, respectivamente.

De los 21 Organismos que, según las cuentas rendidas han tenido beneficios por importe global de 125.287 millones de pesetas, destacan INEM, Jefatura de Tráfico, y FOGASA, con 96.547, 15.506 y 6.734 millones, respectivamente. De los 13 Organismos que han tenido pérdidas, por importe global de 80.555 millones de pesetas, destacan IRYDA, Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, MUFACE y SEA, con 26.564, 14.998, 11.936, 8.546 y 6.256 millones.

[46] Ver apartado I.1.2 del presente Informe.

[47] Según lo indicado en el punto F) de la parte introductoria a este apartado I.3, esta cifra no es consistente con la que aparece en el anexo I-10 por los motivos que allí se expresan.

A) Resultados corrientes del ejercicio.

En el citado anexo I-11, que recoge la composición de los resultados corrientes del ejercicio, se observa el gran peso relativo que tienen en la vertiente del gasto las prestaciones sociales y las transferencias corrientes -un 58% y un 25%- y en la del ingreso las cotizaciones sociales y las transferencias corrientes recibidas -un 62% y un 34% respectivamente-.

Las observaciones fundamentales que inciden en la validez del saldo de la cuenta aquí analizada y de las cifras de las que resulta, son las siguientes:

a) Como se ha hecho mención en el anterior apartado I.3.1.1, no aplican a resultados corrientes: el INEM prestaciones del ejercicio en curso por 217.514 millones de pesetas; FOGASA ingresos y gastos por importe de 8.364 y 12 millones de pesetas respectivamente; el ISFAS gastos por 2.317 millones de pesetas, y el INE cuotas a la Seguridad Social por 698 millones. Por otra parte, FOGASA e ISFAS cargan en resultados corrientes del ejercicio 3.687 y 3.537 millones de pesetas por prestaciones y gastos de ejercicios anteriores.*

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística y el ISFAS aplican indebidamente como ingresos del ejercicio, transferencias del Estado no contraídas por éste por importe de 886, 810 y 211 millones de pesetas respectivamente.

El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo considera como ingreso corriente del ejercicio el importe de 1.757 millones de pesetas, que debió considerar modificación de derechos de ejercicios anteriores y no reintegros del ejercicio, al corresponder a transferencias corrientes contraídas por el Estado en 1989.

b) FOGASA incluye indebidamente como ingresos del ejercicio, 4.322 millones de pesetas correspondientes a Deuda Pública amortizada, como ya se ha hecho referencia en el anterior apartado I.3.2.1.C).

c) La Escuela de Hacienda Pública considera como transferencias de capital recibidas del Estado 127 millones de pesetas que corresponde a transferencias corrientes, lo que minora sus resultados en dicho importe y desvirtúa la cuenta de subvenciones de capital recibidas, como se puso de manifiesto en el apartado I.3.2.2.B) anterior.*

d) El Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa debió aplicar a su cuenta de resultados corrientes, gastos, 99 millones correspondientes a la operación de transferencia referida en el apartado I.3.2.1.A). Por otra parte sus resultados corrientes están indebidamente incrementados en 846 millones de pesetas por la duplicidad de aplicación de ingresos a que se refiere el anterior apartado I.3.1.1.B.3). Esta duplicidad, sin embargo, no tiene repercusión en los resultados totales del Organismo, pues se corrigió cargando la cuenta de resultados extraordinarios.

e) Los resultados corrientes presentados en cuentas se hallan, asimismo, desvirtuados por la existencia de 19 Organismos que no dotan amortizaciones como se pone de manifiesto en el apartado I.3.2.1.A) precedente.

f) Para verificar la coherencia clasificatoria entre las rúbricas presupuestarias del gasto y del ingreso y sus correlativas de resultados se ha elaborado el anexo I-12, en el que aparecen algunas diferencias, cuyo análisis ha puesto de manifiesto:

- La utilización de cuentas de naturaleza comercial en organismos que no realizan este tipo de operaciones.

- La consideración como gastos de obligaciones reconocidas en el capítulo 6 "Inversiones reales" a la que se ha hecho referencia en el apartado I.3.2.1.A) anterior.

- El no tratamiento contable como gastos de personal de las obligaciones realizadas con cargo al artículo 23 "Indemnizaciones por razón del servicio".

- La activación en balance de adquisiciones realizadas con cargo al capítulo 2 que tienen la naturaleza de inventariables.

- La adaptación del Plan General de Contabilidad Pública al INEM asocia determinadas partidas del subgrupo 65 "Prestaciones sociales" de la cuenta de resultados corrientes del ejercicio al artículo 48 "Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro" del presupuesto, lo que justifica las diferencias que por importe de 969 millones de pesetas aparecen en el indicado anexo.

B) Modificación de obligaciones y derechos de ejercicios anteriores.

El saldo deudor de esta cuenta de resultados, en términos agregados, asciende a 3.835 millones de pesetas, como consecuencia de la disminución neta de derechos y obligaciones por 4.835 y 1.000 millones, respectivamente. En relación con el mismo se realizan las siguientes observaciones:

- 5 Organismos, por diferentes importes no significativos, han abonado esta cuenta en vez de la correspondiente de inmovilizado, o en su caso la de resultados extraordinarios, por la anulación de obligaciones contraídas con cargo al capítulo 6 de su presupuesto de gastos.

- La anulación de derechos corresponden a la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, Museo del Prado e Instituto Nacional de Consumo, que cargan indebidamente a esta cuenta 4.718, 100 y 3 millones de pesetas respectivamente, según se pone de manifiesto en el anterior apartado I.3.2.2.B).

- El CSD anula por prescripción 113 millones de pesetas correspondientes a obligaciones que según manifiesta el propio Organismo fueron contraídos excesivos del ejercicio 1985. En similar situación se encuentran 311 millones de pesetas correspondientes a 1986, como se recoge en el apartado I.3.2.2.C), que debieron ser, asimismo, anuladas.

C) Resultados extraordinarios.

El saldo deudor de esta cuenta, en términos agregados, asciende a 2.878 millones de pesetas en 31/12/90. Del análisis de sus componentes, -8 Organismos tienen pérdidas por importe de 2.895 millones de pesetas y 4 Organismos tienen beneficios por importe de 17 millones-, se deducen las siguientes observaciones:

- El Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa presenta una pérdida extraordinaria ficticia de 846 millones de pesetas como consecuencia de la operación referida en los anteriores apartados I.3.1.1 y I.3.3.1.A).

- La pérdida extraordinaria reflejada por MUFACE, por un importe de 1.593 millones de pesetas se produce por la afloración contable en el ejercicio de las amortizaciones acumuladas de su inmovilizado correspondientes a ejercicios anteriores, a que se ha hecho mención en el apartado I.3.2.1.A) anterior.

- El Servicio de Vigilancia Aduanera contabiliza como pérdidas extraordinarias 365 millones de pesetas correspondientes a rectificaciones de saldos entrantes en la implantación del Sistema Contable de los que, al menos, 334 millones debieron ser ajustados con cargo a la cuenta de patrimonio, según se indica en el anterior apartado I.3.2.1.A).

I.3.3.2.- Operaciones pendientes de regularización.

Al margen de los defectos contables expresados en este Informe, cuya incidencia cuantitativa en resultados es desconocida -entre otros, diversos descuadres en transferencias internas, amortizaciones no contabilizadas, falta de afloración de activos y pasivos, etc.-, la repercusión que en resultados tendría la regularización de los gastos no registrados como tales correspondientes a ejercicios anteriores a 1990, según se detalla en el epígrafe I.3.1.1. precedente, supondría un cargo neto en la citada cuenta de 360.896 millones correspondientes al INEM -359.718- y al INE -1.178-. Si a dicho importe se añaden los 218.406 millones que afectan a los resultados del ejercicio 1990, por gastos e ingresos no registrados, o registrados indebidamente, según se ha puesto de manifiesto en el apartado I.3.3.1.A), las pérdidas acumuladas de este subsector en 31/12/90 no recogidas en cuentas ascenderían a 579.302 millones de pesetas. En las alegaciones se dice que los 359.718 millones de pesetas de gastos del INEM sí están recogidos en cuentas dado que están contabilizados aunque como partidas pendientes de aplicar al presupuesto. Se confunden las cuentas en general con las de resultados, siendo éstas últimas a las que se refiere el presente apartado I.3.3.2.*

I.4.- CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS.

En este apartado se presentan los resultados del examen y comprobación de las cuentas de los Organismos autónomos comerciales, industriales y financieros (OACIF) integrados en la CGE, cuya relación completa aparece en el anexo I-13.1, estructurándose la exposición en los tres apartados siguientes:

- **Liquidación de los presupuestos.** Recoge las incidencias detectadas en la ejecución presupuestaria, así como los resultados que se derivan de ella y de las operaciones comerciales.

- **Balance de situación.** En esta parte se expresan las observaciones relativas a las distintas cuentas que configuran la situación patrimonial de los citados organismos.

- **Resultados.** Recoge la composición de los mismos y las excepciones por las que se ven afectados.

Las cuentas rendidas, en general y desde un punto de vista formal, son aritméticamente correctas e internamente consistentes, y se ajustan a lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad de los Organismos autónomos del Estado.

Como excepción al párrafo anterior, se encuentra la Confederación Hidrográfica del Norte de España que presenta en su balance de situación una cifra de resultados del ejercicio -2.944 millones de pesetas (saldo acreedor)- que no coincide con el saldo de la correspondiente cuenta, 1.956 millones de pesetas de beneficio. Este descuadre se traslada a los estados anuales agregados, como se observa en los anexos I-14 (balance) y I-15 (cuenta de resultados) -transcripción de la información de aquéllos- en los que los resultados del ejercicio aparecen por importes de 77.706 y 76.718 millones de pesetas, respectivamente. Se considera que la cuenta de este Organismo no debió haber sido incluida en los estados agregados hasta que no se hubiera subsanado el defecto señalado.

Por otra parte, un gran número de Organismos presentan otras deficiencias e incorrecciones en relación, básicamente, con la

información complementaria -anexos a los estados anuales y soportes justificativos- de forma similar a lo señalado para los OAA en los puntos a) a c) de la introducción del apartado I.3. Asimismo se han producido las distorsiones contables atribuidas en dicha introducción a la aplicación del SICAI relativas a la falta de reflejo en los balances rendidos de los compromisos de gasto adquiridos con cargo al ejercicio 1991.

Finalmente, según consta en el Informe de fiscalización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se remite acompañando a este Informe anual, la cuenta rendida no representa la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera del Organismo a 31/12/90, ni de los resultados obtenidos por el mismo, por los defectos contables que presenta, especialmente en las áreas de inmovilizado, existencias, tesorería y acreedores y por la incorrecta delimitación de sus operaciones presupuestarias y comerciales. En esta parte del Informe, I.4, se hará una breve mención a los defectos más significativos de la cuenta del CSIC, con independencia del desarrollo más detallado que contendrá el propio informe de fiscalización.

I.4.1.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

En los anexos I-13.1 y I-13.2, se presenta la liquidación de los presupuestos del ejercicio correspondientes a los Organismos aquí considerados en su doble vertiente orgánica y económica. En ellos se observa que los gastos e ingresos del subsector, medidos por las obligaciones y derechos contraídos, ascienden a 802.210 y 526.068 millones de pesetas. Si a este último importe se añaden los resultados por operaciones comerciales -312.925 millones de pesetas- se obtienen unos recursos totales de 838.993 millones de pesetas que, como se observa en el anexo I-1.1 superan a los gastos en 36.783 millones de pesetas. La importancia relativa de este subsector dentro del sector público estatal que configura la CGE es del 5% para gastos e ingresos.

I.4.1.1.- Ejecución presupuestaria.

Las deficiencias fundamentales en relación a la regularidad contable y legal de la ejecución presupuestaria de los Organismos tratados en este apartado son las que se deducen:

a) De la falta de aplicación de criterios uniformes en la distinción, a efectos de su diferente tratamiento contable, entre operaciones comerciales y presupuestarias a que se hace referencia en el apartado I.4.1.2 posterior, la cual desvirtúa básicamente la información relativa al volumen de obligaciones reconocidas.

b) Del mantenimiento como deudores por derechos reconocidos del ejercicio, basados base en créditos de transferencias del Estado anuladas por éste según se ha puesto de manifiesto en el anterior apartado I.1.2. En esta situación se encuentran el Instituto de la Juventud, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta del Puerto de Ceuta, con 265 -199 de corriente y 66 de capital-, 253 y 14 millones de pesetas, respectivamente. En los dos últimos casos las transferencias anuladas por el Estado son de naturaleza corriente.

c) La contracción por el CSIC de meros compromisos de gasto que nacen con la adjudicación de contratos, habiéndose producido por este motivo un exceso de contraído de, al menos, 2.279 millones de pesetas.

Asimismo se han encontrado pagos de personal en cuentas extrapresupuestarias, aunque por pequeña cuantía, en 2 Organismos y, finalmente, la Junta del Puerto de El Ferrol no contrae las obligaciones correspondientes a la anualidad del préstamo que le fue concedido para hacer frente al coste de la integración del Montepío de Puertos en el régimen general de la Seguridad Social, por un importe global de 10 millones de pesetas, (5 millones de amortización y 5 millones de intereses).

I.4.1.2.- Operaciones comerciales.

Las operaciones comerciales de los Organismos autónomos no están sometidas al régimen de limitaciones establecido en el TRLGP para los créditos incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos.

Dichas operaciones se desvincularon del presupuesto a partir del ejercicio 1985, manteniendo actualmente una conexión con él a través de la rúbrica del estado de ingresos "Resultados de operaciones comerciales", cuyo desarrollo, tanto en fase de previsión como de ejecución, se recoge en documento anexo al presupuesto y a su liquidación, concretamente en la llamada "Cuenta resumen de operaciones comerciales"[58].

A esta desvinculación presupuestaria no le ha seguido una clara delimitación normativa sobre las operaciones que se consideran comerciales, y que, por tanto, no quedan sometidas a la disciplina presupuestaria. El art. 85 del TRLGP define como operaciones comerciales las propias de la actividad de los Organismos de naturaleza comercial, industrial y financiera, fórmula ambigua que no se esclarece en las disposiciones reglamentarias. Así, mientras la Orden Ministerial de 31/3/86, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de los Organismos autónomos, en sus reglas 114 y 130 a 133, incluye como operaciones comerciales exclusivamente las variaciones de existencias, las compras y las ventas[59], la Circular 2/89, de 28 de abril, define como objetivo del control financiero de las operaciones comerciales, la verificación de los gastos y compras que se integran como coste directo en los bienes y servicios objeto del giro o tráfico habitual comercial, industrial o financiero del Organismo, con excepción de los gastos de personal.

Como se ha venido reiterando sucesivamente en anteriores Informes la indefinición de las disposiciones generales no ha sido subsanada, en general, por las específicas de cada Organismo, lo que ha dado lugar a que no se apliquen criterios homogéneos en el tratamiento de estas operaciones. Por otra parte, a partir de este ejercicio 1990, la LPGE incluye en su articulado la aprobación de las cuentas resumen de operaciones comerciales[60], lo que parece suponer, de una parte, la ratificación de su composición heterogénea desde la perspectiva de las estimaciones previstas, pero de otra, la fijeza de dicha composición según es recogida y aprobada para cada Organismo en el documento presupuestario.

A continuación se recogen los hechos más significativos deducidos del examen de las cuentas referidas:

a) Un grupo de Organismos -Patronatos de Casas, ENESA, FROM y Junta del Puerto de Málaga- tratan presupuestariamente, tanto en fase de previsión como de realización, todas o parte de sus operaciones específicamente comerciales, pese a su clasificación como Organismos comerciales, industriales o financieros.*

b) La Confederación Hidrográfica del Norte de España y el Instituto Español de Oceanografía no prevén la realización de operaciones comerciales, al incluir todas sus operaciones de ingresos y gastos como presupuestarias en fase de previsión, mientras que en las cuentas rendidas recogen compras comerciales por importe de 8 y 62 millones de pesetas, respectivamente.

c) Otro grupo de Organismos -ONLAE y las Juntas de Puerto de Almería, Cádiz, Ceuta, La Coruña, El Ferrol, Las Palmas, Tenerife, Vigo, Pontevedra y Villagarcía de Arosa- recogen bajo el concepto único de "compras" los cargos previstos y realizados por operaciones comerciales, desarrollándolo en varias rúbricas de compras y gastos en la cuenta de resultados corrientes del ejercicio. Especialmente significativo es el caso del ONLAE que realiza 45.900 millones de pesetas como compras de mercaderías según el literal de su cuenta, que realmente corresponden a comisiones, transportes comerciales, publicidad y al beneficio para distintas entidades por sorteos finalistas. A partir de este ejercicio, en el que, como se ha puesto de manifiesto las cuentas de operaciones comerciales se aprueban, no deberían darse situaciones como la aquí descrita.

d) El Servicio Militar de Construcciones prevé diversos tipos de gastos en su cuenta de operaciones comerciales, entre los que se encuentran incluso los de personal que, una vez realizados, son aplicados, de forma incorrecta, a la rúbrica de compras, tanto en aquella como en su cuenta de resultados corrientes.

e) Los restantes Organismos presentan, tanto en el estado de operaciones comerciales previstas como en la cuenta que recoge las realizadas, unas veces bajo la rúbrica de compras y otras con mayor o menor desglose, una amplia gama de compras y gastos.

La situación descrita pone de relieve no sólo una total falta de uniformidad en el tratamiento de las operaciones comerciales, que afecta incluso a Organismos dedicados a la misma actividad como ocurre en el caso de las Juntas de Puerto y Confederaciones Hidrográficas, sino también una manifiesta inconsistencia de la documentación presentada por algunos Organismos a efectos de aprobación de sus presupuestos, con la que se incluye en las cuentas rendidas.

Generalmente, las cargas distintas de las compras que los Organismos consideran como comerciales corresponden a gastos imputables a la cuenta 64 "Trabajos, servicios y suministros exteriores", que pueden formar parte de los costes directos de producción; no obstante, con alguna frecuencia, se incluyen gastos de publicidad y propaganda, cuya configuración como coste directo integrante de los productos y servicios finales propios de los Organismos aquí considerados, puede, en ocasiones, incluso ser más que dudosa, y otros de diversa naturaleza que, por suponer su tratamiento como operaciones comerciales una manifiesta elusión de las normas presupuestarias, merecen comentario específico.

Hay, en efecto, Organismos, que incluyen y gestionan dentro de la operatoria de operaciones comerciales, determinados gastos que incluso aplicando la interpretación más amplia de las disposiciones vigentes en la materia, a las que se ha hecho referencia anteriormente, no tienen cabida en ella, por cuanto o no forman parte del coste de producción de los bienes o servicios, o se encuentran expresamente excluidos como serían los gastos de personal. Como más significativos se encuentran: el CSIC que considera operaciones comerciales, adquisiciones de inmovilizado, gastos de personal y transferencias corrientes y de capital por importe de 2.660, 1.571, 216 y 507 millones de pesetas, que son imputados correctamente en su contabilidad patrimonial; el Servicio Militar de Construcciones, como se ha hecho referencia con anterioridad, y el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Terradas (INTA) que incluyen gastos de personal por importes respectivos de 2.952 y 318 millones, que son aplicados a la rúbrica de compras en sus cuentas de resultados corrientes.

[58] Hasta el ejercicio 1985 todas las operaciones de los Organismos de carácter comercial, industrial y financiero formaban parte del Presupuesto y algunos créditos tenían la condición de estimativos.

[59] Este criterio se mantiene en los modelos de la "Cuenta resumen de operaciones comerciales" establecidos en las Ordenes Ministeriales de elaboración de los presupuestos.

[60] LPGE 1990, art. 5 "Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos Organismos recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales".

I.4.1.3.- Resultados de gestión presupuestaria:

Los resultados de gestión presupuestaria de los OACIF en el ejercicio 1990 presentan un superávit, incluyendo operaciones comerciales, de 36.783 millones de pesetas, como se observa en el anexo I-1.1. Dicho importe presenta el siguiente detalle (en millones de pesetas):

	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	SUPERÁVIT (DÉFICIT)
Operaciones corrientes	424.673	626.392	(201.719)
Operaciones de capital	73.169	156.010	(82.841)
Operaciones financieras	28.226	19.808	8.418
TOTAL	526.068	802.210	(276.142)
Rdos. op. comerciales			312.925
TOTAL			36.783

Estos resultados vienen afectados de una parte por el incorrecto tratamiento de las operaciones comerciales a que se ha hecho referencia anteriormente, y en especial por la inclusión dentro de estas operaciones de gastos de naturaleza presupuestaria, que desvirtúa tanto el déficit de gestión propiamente dicho, como el resultado de las operaciones comerciales, si bien no afecta al resultado final, y de otra parte, por las salvedades a la ejecución presupuestaria puestas de manifiesto, asimismo, en el anterior apartado I.4.1.1., en el Instituto de la Juventud, Confederación Hidrográfica del Tajo, Junta del Puerto de Ceuta y CSIC, por importe de 265, 253, 14 y 2.279 millones de pesetas, junto con otras pequeñas cuantías de importe poco significativo.

I.4.2.- BALANCES DE SITUACIÓN.

En el anexo I-14 aparece el balance diferencial de situación agregado que compara las situaciones patrimoniales a 31/12/89 y 31/12/90[61].

I.4.2.1.- Activo.

A) Inmovilizado.

El saldo conjunto de las cuentas de inmovilizado a 31/12/90 asciende a 1.803.743 millones de pesetas, de los que 911.272 corresponden a material, 18.058 a inmaterial, 870.756 a financiero y 3.657 a activo ficticio. (Gastos a cancelar).

A.1) Inmovilizado material.

De su análisis se deducen las siguientes observaciones:

a) Al igual que en ejercicios anteriores, las Juntas de Puerto y la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos (CAGP), revalorizan su inmovilizado según los índices de precios al consumo, de acuerdo con una norma emanada de la Dirección General de Puertos, que no respeta los criterios de valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública[62]. Dicha revalorización supone a 31/12/90 el 67% del activo revalorizado neto, con porcentajes que van desde el 44% en la Junta del Puerto de El Ferrol, al 104% en la Junta del Puerto de La Coruña[61].

Así, la variación neta del inmovilizado material del conjunto de Puertos incluidos en los estados agregados, que asciende a 14.959 millones de pesetas, procede en un 83% de incrementos por revalorización y en un 17% de inversiones reales de capital.

Por otra parte, siete Juntas de Puertos han reclasificado parte de su inmovilizado material como activo ficticio, por un importe conjunto de 411 millones de pesetas, por comprender gastos de conservación y mantenimiento y estudios y trabajos técnicos. A dicha partida se le han fijado cuotas de amortización variables en lugar de imputarla a resultados, en su totalidad, como procedía.

Asimismo, la CAGP y 10 Juntas de Puerto, entre las que se encuentran 3 de las referidas en el párrafo anterior, aplican a su cuenta de resultados corrientes del ejercicio, 349 millones de pesetas por gastos de conservación y mantenimiento recogidos en el capítulo 6 de su presupuesto, lo que pone de manifiesto su incorrecta imputación presupuestaria.

b) El Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) tiene contabilizado inmovilizado material por importe de 196.709 millones de pesetas, -85% de su activo- que no es controlado, en su totalidad, por el Organismo, que desconoce la parte traspasada a Comunidades Autónomas.

Por otra parte, en este ejercicio reclasifica de la cuenta de "Inmovilizado material" a la de "Inversiones Públicas en infraestructuras y bienes dedicados al uso general", 304 millones de pesetas gastados en 1989 con cargo al capítulo 6 de su presupuesto, con objeto de paliar daños causados por inundaciones. De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública dicho importe debió ser dado de baja del inmovilizado con cargo a la cuenta de "Patrimonio entregado al uso general".

c) Aeropuertos Nacionales, cuyo inmovilizado material asciende a 51.823 millones de pesetas, contabiliza en la rúbrica de "edificios y otras construcciones" todo el incremento del inmovilizado material experimentado en el ejercicio, por un importe de 7.384 millones de pesetas, debido a que, según manifiesta, "está en ejecución el proyecto que dará la definitiva composición y valoración del inventario". Así, por ejemplo, aplica a la citada cuenta 206 millones gastados en el ejercicio con aplicación presupuestaria a "gastos de inversiones de carácter inmaterial".

d) La Confederación Hidrográfica del Tajo no recoge adecuadamente su inmovilizado material, que asciende a 2.541 millones de pesetas, debido a que no contabiliza ni las bajas ni las inversiones que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se adscriben al Organismo, y a que en este ejercicio ha considerado como inversiones públicas en infraestructura y bienes destinados al uso general el total de las obligaciones reconocidas en el capítulo 6 de su presupuesto, cuando, al menos, el 40% son para el funcionamiento de sus servicios, según se desprende de comprobaciones específicas realizadas en el propio Organismo.

e) No han sido objeto de amortización los activos correspondientes a 17 Organismos de los 53 que están incluidos en los estados agregados. El valor del activo no amortizado supone el 40% del total reflejado en las cuentas de este subsector, destacando, como casos más significativos el ICONA, las Confederaciones Hidrográficas, con excepción de la del Ebro, y Aeropuertos Nacionales, que alega para esta falta de dotación que no está delimitada la titularidad jurídica de muchos de sus bienes y que no dispone de inventario de los mismos.

A.2) Inmovilizado inmaterial.

Este inmovilizado, resultado de activar gastos presupuestarios aplicados a determinados créditos que se incluyen en el capítulo 6 sin atender en muchos casos a su verdadera naturaleza económica, corresponde a 12 Organismos de los cuales solamente 3 realizan las amortizaciones pertinentes. Su importe bruto se eleva a 19.854 millones de pesetas y su fondo de amortización a 1.798 millones.

Las incidencias principales que afectan a estas cuentas son las siguientes:

a) El Instituto Tecnológico Geominero de España presenta un importe acumulado de 10.464 millones de pesetas, de los que 3.413 millones corresponden a 1990, por "estudios y trabajos de investigación", que no es objeto de amortización.

b) El ICONA tiene un activo inmaterial a 31/12/90 que asciende a 3.306 millones de pesetas, formado en su mayor parte por campañas de publicidad contra incendios, incorrectamente activadas, de las que 1.105 millones corresponden a 1990.

c) TURESPAÑA, antiguo Instituto de Promoción del Turismo de España, tiene un capítulo 6 de su presupuesto de gastos formado, en su mayor parte, por gastos destinados a la promoción del turismo, que activa como inmovilizado inmaterial, de acuerdo con su adaptación al Plan General de Contabilidad Pública, y son financiados por transferencias de capital del Estado. En este ejercicio haciendo uso de la posibilidad dada por dicha adaptación cancela el saldo a 31/12/89 del inmovilizado aquí considerado con cargo a la cuenta de subvenciones de capital. Esta operación se realiza por 18.144 millones de pesetas, 2.650 millones más que el importe del citado saldo, 15.494 millones de pesetas. Se considera que el importe vivo a 31/12/90, 2.519 millones de pesetas, no constituye tampoco un activo sino meros gastos para el Organismo que, por tanto, debieran ser financiados mediante transferencias corrientes.

d) El FROM y el Instituto Astrofísico de Canarias aplican a sus cuentas de resultados corrientes 561 y 154 millones de pesetas, respectivamente, por gastos recogidos en el capítulo 6 de su presupuesto para inmovilizado inmaterial, lo que pone de manifiesto su incorrecta clasificación presupuestaria.

A.3) Inmovilizado financiero.

El Consorcio de Compensación de Seguros incluye bajo esta rúbrica 305.459 millones de pesetas por préstamos al CESCE que derivan de operaciones relativas a la cobertura de riesgos políticos y extraordinarios, de los que, de acuerdo con la Ley 10/70, de 4 de julio y Decreto 3128/71, de 22 de diciembre, el Organismo es un mero administrador por cuenta del Estado y, en consecuencia, no debieran haber sido incluidos en la cuenta referida.

A.4) Activo ficticio.

La práctica totalidad de este concepto está integrado por gastos a cancelar de las Juntas de Puerto; de una parte los referidos en el anterior apartado A.1.a) de este epígrafe de Inmovilizado, por

[61] Los datos referidos a 31/12/89 difieren de los presentados en el mismo anexo del Informe anual de 1989 como situación a dicha fecha, debido a la variación de los Organismos incluidos en uno y otro anexo. En el anexo I-14 de este Informe se recogen sólo los Organismos incluidos en los estados agregados correspondientes a 1990.

[62] El Plan General de Contabilidad Pública fue modificado en este punto por Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la IGAE, que aprueba la Instrucción provisional de contabilidad del inmovilizado no financiero de la Administración del Estado.

[61] En las alegaciones del Gobierno a anteriores Informes, se mantiene que la referida revalorización se ampara en la "adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los Puertos" y en la Ley 1/66 sobre "Régimen Financiero de los Puertos Españoles"; estas razones no se comparten, toda vez que la adaptación se limita en su introducción a suscitar el problema sin resolverlo, y la Ley, si bien establece que las tarifas han de cubrir los gastos reales y entre ellos la depreciación de los bienes, de ello no puede colegirse la necesidad de revalorizarlos en la contabilidad financiera, dado que el coste real puede ser objeto de cálculo independiente o dentro de la contabilidad analítica.

un importe a 31/12/90 de 387 millones de pesetas, y de otra por los derivados del préstamo concedido por el Estado a estos Organismos para hacer frente a parte del coste de integración del Montepío de Puertos en la Seguridad Social, pendiente de reembolso, que compensan la cuenta de pasivo "Préstamos recibidos del Sector Público"[4], por un importe de 3.252 millones de pesetas.

Esta cuenta está infravalorada en 317 millones de pesetas, importe correspondiente a la Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz y a la CAGP que han efectuado en el ejercicio, exclusivamente, la cancelación de la anualidad, y no el registro de la totalidad de la deuda, con la correspondiente incidencia en la cuenta de pasivo.

Por otra parte, la Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir no amortiza el activo ficticio aquí considerado por la parte del préstamo reembolsado en el ejercicio -25 millones de pesetas-, con el consiguiente efecto sobre el saldo de su cuenta de resultados corrientes.

B) Existencias.

El importe acreedor que se recoge en el balance agregado que figura en el anexo I-14 -20.575 millones de pesetas-, resulta de la diferencia entre el valor de las existencias del sector a 31 de diciembre -102.575 millones- y las "provisiones técnicas" del Consorcio de Compensación de Seguros, que importan 123.150 millones[5].

De los 26 Organismos que utilizan esta cuenta para recoger el valor final de sus existencias comerciales, ninguno contabiliza las eventuales disminuciones de valor de los bienes inventariados mediante las dotaciones a la cuenta de "Provisión por depreciación de existencias".

C) Deudores.

El saldo conjunto de las cuentas de deudores asciende a 249.596 millones de pesetas, de los que 105.554 corresponden a deudores por derechos reconocidos, 123.917 a deudores por operaciones comerciales, 10.968 a otros deudores no presupuestarios y 15.219 a Entidades públicas, estando dotadas provisiones por insolvencias por importe de 6.062 millones de pesetas. En relación con estos saldos se observa que:

a) El Instituto de la Juventud, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta del Puerto de Ceuta mantienen como deudores por derechos reconocidos del ejercicio corriente y el FORPPA, la Junta del Puerto de Avilés y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) como deudores por derechos reconocidos de ejercicios anteriores, 265, 253, 14, 399, 105 y 20 millones, respectivamente, a causa de créditos por transferencias del Estado anulados por éste. Por otra parte, la citada Junta del Puerto de Avilés, mantiene asimismo deudores por derechos reconocidos de ejercicios anteriores por importe de 219 millones de pesetas, correspondientes a transferencias de la CAGP cuya contrapartida no consta en este Organismo.

Por otra parte, el Instituto Español de Oceanografía anula derechos de ejercicios anteriores frente al Estado por un importe de 196 millones de pesetas que éste considera como pendientes y, sin embargo, mantiene 98 millones de pesetas que el Estado abonó y él aplicó, indebidamente, al corriente en lugar de a ejercicios anteriores donde estaban reconocidos.

Asimismo, el Instituto Carlos III mantiene deudores por derechos reconocidos de ejercicios anteriores correspondientes a transferencias del Estado, por importe de 179 millones de pesetas, que fueron descontadas en los respectivos pagos por servicios traspasados a Comunidades Autónomas y por cuotas patronales a la Seguridad Social de distintos hospitales, y por tanto debieran ser depurados. Las alegaciones, que confirman lo anterior, añaden a las dos partidas que conforman los 179 millones de pesetas citados, una tercera de 506.486 pesetas que no corresponde a 1990 sino a 1991.*

Como se viene manteniendo reiteradamente en anteriores Informes de este Tribunal, y es objeto de exhaustivo tratamiento en el anterior apartado I.1.2, sería imprescindible la conciliación de los datos concordantes en las distintas Cuentas componentes de la General del Estado, para que no siguieran manteniéndose situaciones como la expuesta en los párrafos anteriores.

b) En la misma línea que en ejercicios anteriores, los deudores por operaciones comerciales de determinados Organismos presentan cuantías sensiblemente elevadas para su volumen de operaciones o antigüedad significativa en sus saldos. Así:

- El Parque Móvil Ministerial tiene un saldo de 4.835 millones de pesetas, de los que 2.002 millones corresponden al ejercicio -48% de las ventas- y 2.833 millones corresponden a ejercicios anteriores -63% del saldo entrante-. En este ejercicio el Organismo no ha dotado provisión alguna para insolvencias, y la que procede de ejercicios anteriores corresponde al importe de los pendientes de los ejercicios 1982 y 1983.

- El Organismo Boletín Oficial del Estado tiene un saldo de 1.177 millones de pesetas, de los que 357 millones corresponden a ejercicios anteriores (215 millones a los ejercicios 1985 y 1986), ascendiendo la provisión para insolvencias a 41 millones de pesetas.

- El Organismo Aeropuertos Nacionales tiene un saldo de 34.633 millones de pesetas, de los que 25.032 millones corresponden al ejercicio en curso -34% de sus ventas- y 9.601 millones a ejercicios anteriores, de los que, según la fiscalización efectuada por este Tribunal, se deduce la condición de dudoso cobro de una parte significativa de su importe, sin que se haya realizado la oportuna provisión.

- El Grupo de Confederaciones Hidrográficas tiene, en general, un bajo índice de cobro de estos deudores, con una media del 44% en los del ejercicio y del 43% en los que provienen de ejercicios anteriores. Así, destacan en deudores del ejercicio las Confederaciones Hidrográficas del Sur de España y del Guadiana y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con una realización del 16, 31 y 37% y nuevamente la Confederación Hidrográfica del Sur de España y las del Norte de España, Tajo, Guadiana y Guadalquivir con índices de cobro de deudores de ejercicios anteriores del 15, 19, 19, 32 y 31 respectivamente, siendo especialmente significativo el saldo pendiente de la última Confederación citada que ascendía, a 31/12/90, a 3.277 millones de pesetas.

Ninguno de estos Organismos dota provisión para insolvencias.

D) Cuentas financieras.

Según se observa en el anexo I-14, el saldo conjunto de estas cuentas en 31/12/90 asciende a 948.507 millones de pesetas, de los que 381.182 corresponden a inversiones financieras temporales, 52 a fianzas y depósitos a corto plazo, 195.599 a partidas pendientes de aplicación, 371.747 a caja, bancos e instituciones de crédito y -73 a Tesoro Público.

En relación con las mismas se realizan las siguientes consideraciones:

a) El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), por operaciones con el FORPPA, recoge tanto en el activo como en el pasivo del balance las cuentas de "partidas pendientes de aplicación", con saldos de 44.842 y 46.773 millones de pesetas, respectivamente, de los que resulta una deuda neta a favor del último Organismo citado de 1.931 millones. Por su parte, el FORPPA recoge en cuentas de relación con el SENPA, 3.438 millones de pesetas en "partidas pendientes de aplicación" (saldo deudor), 2.806 millones como "deudores por operaciones comerciales", 11.297 millones como "acreedores por operaciones comerciales" y 18 millones como "préstamos a corto plazo", lo que da como resultado un saldo neto a favor del SENPA de 5.035 millones de pesetas. La diferencia entre ambos, tanto de importe, 6.966 millones, como de conceptuación contable es atribuida por los Organismos a la utilización de diferentes criterios contables.

Asimismo, el SENPA mantiene como "partidas pendientes de aplicación", tanto deudoras como acreedoras, saldos sin movimiento al menos en los últimos 4 años, relativos a la Dirección General de Producción Agraria y el Tesoro Público que debieran ser objeto de aplicación definitiva.

b) El saldo acreedor de la cuenta Tesoro Público -73 millones de pesetas- corresponde en su totalidad al ONLAE, que en este ejercicio ha regularizado la situación puesta de manifiesto en Informes anteriores de sobrevaloración de la misma. El importe acreedor del saldo, resulta del error cometido por el Organismo en una transferencia de Apuestas Deportivas por 3.701 millones de pesetas, que manifiesta corregir en 1991. No obstante este importe, la cantidad a consignar en el ONLAE no coincide con la recogida en la Cuenta de la Administración General del Estado que asciende a 6.564 millones de pesetas.

E) Resultados pendientes de aplicación.

Los resultados pendientes de aplicación agregados a 31/12/90 ascienden a 242.694 millones de pesetas, siendo consecuencia de pérdidas acumuladas pendientes de regularizarse en 16 Organismos, por 337.032 millones de pesetas, entre los que destacan el FORPPA con 203.564, el ICONA con 62.556 y el Consorcio de Compensación de Seguros con 57.271, y beneficios acumulados en 18 Organismos por 86.810 millones de pesetas, siendo significativos el SENPA con 37.481 millones, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) con 11.231 millones y Aeropuertos Nacionales con 8.829 millones.

Como ya se puso de manifiesto en Informes anteriores, los beneficios acumulados de ENESA se producen al haberse reconocido ingresos por aportaciones estatales al coste de la prima en los seguros agrarios, en función del Plan de Seguros previsto que luego se ejecuta con desviaciones significativas a la baja y que, por lo tanto, no debería haber dado origen al reconocimiento de derechos en la parte del Plan no ejecutada. No obstante, en este ejercicio se financia parte del Plan con fondo de maniobra -5.897 millones de pesetas- en lugar de con subvenciones del Estado, y se produce una elevada ejecución de los Planes de 1989 y 1990, lo que da lugar a una pérdida por operaciones corrientes de 7.440 millones de pesetas.

[4] La Dirección General de Puertos y Costas dio, en 1989, instrucciones para la contabilización de este préstamo, ordenando que se diera de alta en el pasivo de las distintas Juntas con cargo a la cuenta a que se refiere el epígrafe por el importe total adeudado y que las anualidades de amortización se aplicaran al capítulo 9 de sus presupuestos saneando paralelamente, por el importe de éstas, el saldo de la indicada cuenta con cargo a la de resultados corrientes en concepto de amortización de gastos.

[5] Este Organismo contabiliza las provisiones en el grupo 3 de acuerdo con su plan de adaptación contable. A estos efectos hay que señalar la falta de homogeneidad interna de los estados agregados confeccionados por la IGAE, al sumarse como "existencias comerciales" estas provisiones con las del resto de los Organismos.

I.4.2.2.- Pasivo.

A) Patrimonio y reservas.

Los saldos de estas cuentas a 31/12/90 ascienden a 511.837 y 200.470 millones de pesetas, respectivamente.

El ONLAE ha cargado en el ejercicio sus cuentas de "patrimonio" y "reservas" en 8.847 y 10.153 millones de pesetas, respectivamente, para compensar una transferencia al Estado de 19.000 millones de pesetas que no hace pasar por su cuenta de resultados corrientes.

B) Subvenciones de capital.

Ascienden en términos agregados a 627.559 millones de pesetas, habiendo experimentado una disminución en su saldo de 7.490 millones de pesetas. La diferencia que se produce entre el teórico incremento correspondiente a los derechos reconocidos en el capítulo 7, que ascendieron a 71.924 millones de pesetas, y la disminución que se deduce de las cuentas rendidas corresponde, en su mayor parte, a:

- La baja efectuada en TURESPAÑA a que se hizo referencia en el anterior apartado I.4.2.1.A.2), por importe de 18.144 millones de pesetas, para sanear su inmovilizado inmaterial.

- El traspaso desde esta cuenta a la de resultados extraordinarios de 41.858 millones de pesetas, importe de las anualidades de amortización de 1989 y 1990 de la póliza de crédito con el Banco de España del FORPPA que el Estado asumió en 1989[46].

- El CSIC, el INTA y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que incorporan a sus cuentas de patrimonio el saldo de la cuenta de subvenciones de capital a 31/12/89, por importe de 7.250, 2.413 y 376 millones de pesetas, respectivamente; El Consorcio de Compensación de Seguros aplica, por otra parte, su saldo, por importe de 3.345 millones de pesetas, a reservas y al fondo de estabilización.

- La CAGP reduce el saldo de su cuenta en 6.380 millones de pesetas, importe de las transferencias dadas en el ejercicio por el Fondo de Compensación Interportuario, de acuerdo con su adaptación al Plan General de Contabilidad Pública[47].*

Por otra parte, la Junta del Puerto de Avilés y el Instituto de la Juventud tienen sus cuentas sobrevaloradas en 324 y 66 millones, respectivamente, por contener derechos a cobrar del Estado que éste anuló, como se recoge en los apartado I.4.1.1, de este Informe.*

C) Deudas a medio y largo plazo.

Su importe a 31/12/90, que asciende a 591.792 millones de pesetas, se desglosa en empréstitos, 44, préstamos recibidos del sector público, 325.604, préstamos recibidos fuera del sector público, 11.493 y fianzas y depósitos recibidos, 254.651 millones de pesetas.

El 96% del saldo corresponde a 2 Organismos de carácter financiero, la Caja Postal de Ahorros y el Consorcio de Compensación de Seguros. El importe correspondiente a este último, 313.235 millones de pesetas, está formado por los créditos concedidos al Organismo por el Estado por el seguro de crédito a la exportación y son el origen de los préstamos a que se refiere el anterior apartado I.4.2.1.A.3), siéndoles de aplicación las prevenciones en él expuestas.

El Estado recoge como deuda 318.235 millones de pesetas, que incluyen 5.000 millones de pesetas pendientes de pago, los cuales no son reflejados por el Organismo, que, en este ejercicio, da tratamiento extrapresupuestario, y por tanto de caja, a los ingresos recibidos y a los pagos realizados por este concepto.

El ICONA tiene un saldo de 1.500 millones de pesetas en préstamos recibidos del sector público y 10.993 de fuera del sector público, correspondientes a sendas operaciones con el Banco de Crédito Agrícola y el Banco Europeo de Inversiones, aprobadas por la LPGE del ejercicio para financiar la compra de aviones.

Por otra parte, el conjunto de las Juntas de Puertos recoge bajo la rúbrica de préstamos recibidos del sector público el relativo a la financiación del coste de la integración del Montepío de Puertos a que se hizo referencia en el anterior apartado I.4.2.1.A.4). Asimismo, estos Organismos no recogen contablemente la deuda aplazada por la propia Seguridad Social, que a 31/12/90 ascendía en su totalidad a 1.564 millones de pesetas y para los incluidos en los estados agregados a 985 millones[48].

D) Deudas a corto plazo.

Su importe a 31/12/90, que asciende a 1.061.064 millones de pesetas, se desglosa en préstamos a corto plazo recibidos del sector público -15.000-, acreedores por obligaciones reconocidas -30.293-, acreedores por pagos ordenados -22.886-, acreedores por devoluciones de ingresos -933-, acreedores por operaciones comerciales -255.019-, Entidades Públicas -10.015-, otros acreedores no presupuestarios -168.434- y fianzas y depósitos recibidos -558.484-.

El 88% del saldo conjunto corresponde al ONLAE y a la Caja Postal de Ahorros con 221.072 millones de pesetas en acreedores por operaciones comerciales[49], en el primer caso, y 136.266 millones de otros acreedores no presupuestarios y 558.448 millones de fianzas o depósitos, en el segundo, como partidas más significativas.

Por otra parte, destaca en el ejercicio el incremento de las deudas a corto plazo del Parque Móvil, 52%, debido principalmente a la aforación de una deuda con CAMPSA por 663 millones de pesetas correspondientes a los ejercicios 1985 y 1986.

Asimismo, como se ha puesto de manifiesto en el anterior apartado I.4.1.1, el CSIC contabiliza como acreedores por obligaciones reconocidas el importe de las adjudicaciones en el caso de contratos, lo que da lugar a una sobrevaloración de su saldo a 31/12/90 de 2.279 millones de pesetas. Este mismo Organismo presenta un saldo en su cuenta de entidades públicas, IVA repercutido, de 559 millones de pesetas al no liquidar a la Hacienda Pública este impuesto desde su entrada en vigor, enero de 1986.

E) Partidas pendientes de aplicación.

En relación con el saldo de esta cuenta, con un importe a 31/12/90 de 81.057 millones de pesetas se realizan las siguientes observaciones:

- El SENPA mantiene 46.773 millones de pesetas correspondientes a sus relaciones con el FORPPA, sin el correlativo reflejo en la contabilidad de éste, como se hizo referencia en el anterior apartado I.4.2.1.D.a).

- El FORPPA mantiene desde 1987 en ingresos pendientes de aplicación, 875 millones de devoluciones por pagos indebidos que fueron aplicados en su día a compras.

F) Ajustes por periodificación

Esta cuenta, con un saldo a 31/12/90 de 23.393 millones de pesetas, se desglosa en pagos diferidos con 959 millones y cobros anticipados, con 22.434 millones de pesetas.

Con independencia de las operaciones propias de los gastos e ingresos financieros, destaca en cobros anticipados, al igual que en ejercicios anteriores, el importe correspondiente al CSIC, 3.893 millones de pesetas, que supone el 48% de sus ventas en el ejercicio y de los que no se tiene constancia que su periodificación corresponda a una distribución objetiva del gasto que financian durante su periodo de ejecución.

En pagos diferidos, el Servicio Militar de Construcciones presenta un saldo de 328 millones de pesetas, que corresponde, en su mayor parte, a provisión para responsabilidades, por un contencioso de personal recurrido por el Organismo ante el Tribunal Supremo.*

I.4.2.3.- Cuentas de orden y control presupuestario. Gastos con cargo a ejercicios futuros.

El importe de las autorizaciones y compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros asciende a 31/12/90 a 12.859 millones de pesetas según la información rendida por los Organismos. Sin embargo, en numerosos balances de situación se omiten los compromisos relativos al ejercicio 1991, por un importe global de 18.210 millones de pesetas. Esta omisión es consecuencia de la aplicación del SICAI según se ha hecho referencia al final de la introducción a este apartado I.4. Por otra parte, la Junta del Puerto de Gijón y la del Puerto y Ría de Avilés incluyen como compromisos, retenciones de crédito por importe conjunto de 1.725 millones de pesetas.

Con excepción de lo expuesto en el párrafo anterior, no se han observado anomalías reseñables en relación con las autorizaciones y compromisos que nos ocupan, detallándose a continuación, a título meramente informativo, el pormenor por años y capítulos de los mismos en millones de pesetas.

	1991	1992	1993	1994 y SS	TOTAL
Capítulo 2	775	381	202	--	1.358
Capítulo 6	18.703	5.562	2.320	1.391	27.976
TOTAL	19.478	5.943	2.522	1.391	29.334

[46] De acuerdo con las normas dadas por la IGAE, el importe de la póliza -202.291 millones de pesetas- se incorporó al saldo de subvenciones de capital del FORPPA, debiendo ser aplicado a resultados extraordinarios a su vencimiento en 10 anualidades. Como se puso de manifiesto en el Informe anual de 1989 de este Tribunal, en este ejercicio no se realizó la citada aplicación, causa por la que en éste se regularizan dos anualidades.

[47] La Comisión Administrativa de Grupos de Puertos realiza una función intermediadora entre las aportaciones de los Organismos al Fondo de Compensación y las transferencias a realizar por aquélla a los distintos Organismos subvencionados, siendo competencia de la Dirección General de Puertos y Costas la distribución de las cantidades integrantes del Fondo.

[48] Deuda aplazada a 10 y 20 años por importes de 1.722 y 512 millones de pesetas a devolver a partir de 1988.

[49] Principalmente los premios del sorteo de Navidad.

I.4.2.4.- Balance diferencial 1990/1989. Fondo de maniobra.

Del balance diferencial agregado que aparece en el anexo I-14 se pueden obtener los valores del fondo de maniobra a 1/1/90 y 31/12/90. El exceso o defecto del fondo de maniobra existente al final del ejercicio anterior constituye un recurso o una aplicación presupuestaria y como tal debe ser recogido en el artículo 58 del presupuesto de ingresos "Variación fondo de maniobra".

El citado mecanismo, debidamente utilizado, evita que haya Organismos con exceso o defecto de capital circulante. No obstante del examen y comprobación de las cuentas de los OACIF en esta materia se deduce que:

a) Hay múltiples Organismos que no consignan por los importes razonablemente previsibles en el momento de elaborar sus presupuestos los excedentes, respecto a necesidades, de su fondo de maniobra. Para un valor agregado de éste a 1/1/90 de 222.566 millones de pesetas, en el presupuesto inicialmente aprobado se prevé su disminución por importe de 48.651 millones de pesetas, si bien posteriormente se utilizan para financiar modificaciones de crédito 10.971 millones[70].

b) Atendidas las importantes diferencias de los valores absolutos y relativos del fondo de maniobra para los distintos Organismos, se hace necesario que la Administración realice un análisis profundo de la situación financiera de éstos, y en su caso, determine los índices de solvencia y liquidez máximos y mínimos permisibles, y en función de ellos exija una adecuada presupuestación y utilización del fondo de maniobra que permita una política de transferencias coherente entre el Estado y los OACIF, todo ello para evitar situaciones de excesos o defectos de capital circulante y para mejorar la aplicación del principio de unidad de caja.

I.4.3.- RESULTADOS.

I.4.3.1.- Resultados del ejercicio.

Según se observa en el anexo I-15, la cuenta de resultados del ejercicio presenta un saldo agregado acreedor por importe de 76.719 millones de pesetas como consecuencia de beneficios corrientes, extraordinarios y de cartera de valores de 34.957, 43.190 y 2.159 millones de pesetas, respectivamente, y de pérdidas por modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores y otros cargos, por importe de 2.569 y 1.018 millones.

El importe citado en último lugar corresponde a un asiento directo efectuado por el Consorcio de Compensación de Seguros, que obedece a la compensación de un ingreso reflejado en la cuenta de resultados corrientes en el concepto de "Transferencias corrientes del Estado para compensar pérdidas", para paliar las acumuladas de ejercicios anteriores en la cobertura de los riesgos comerciales del seguro de crédito a la exportación.

34 Organismos han tenido beneficios por importe global de 100.277 millones de pesetas, destacando el FORPPA, el Consorcio de Compensación de Seguros, la Caja Postal de Ahorros, ONLAE, BOE, SENPA y Aeropuertos Nacionales, con 32.496, 27.204, 13.384, 6.107, 2.640, 2.359 y 2.312, respectivamente; por el contrario, han tenido pérdidas 19 Organismos, por un importe conjunto de 23.558 millones, entre los que sobresalen CIEMAT, ENESA, ICONA y Confederación Hidrográfica del Ebro, con 8.473, 7.440, 2.433 y 1.127, respectivamente.

A) Resultados corrientes del ejercicio.

En el citado anexo I-15 aparece la composición de los resultados corrientes del ejercicio. En relación con los mismos se realizan las siguientes observaciones:

a) A lo largo de este apartado I.4 del Informe se han puesto de manifiesto una serie de defectos con incidencia en la representatividad de esta cuenta, entre los que destacan:

- Los recogidos en el apartado I.4.1.1 "Ejecución presupuestaria", en especial los referidos a transferencias corrientes anuladas por el Estado, por un importe conjunto de 466 millones de pesetas.

- La activación indebida de gastos como inmovilizado inmaterial en diversos Organismos, según se expone en el apartado I.4.2.1.A.2).

- La falta de las oportunas dotaciones a amortizaciones y provisiones expresada en varios de los apartados del epígrafe I.4.2.

b) Al igual que en ejercicios anteriores, ENESA tiene un resultado por operaciones corrientes -pérdida de 7.471 millones de pesetas- que carece de representatividad al encontrarse afectado por los defectos señalados en el apartado I.4.2.1.E) precedente.

c) El CIEMAT aplica a esta cuenta la regularización de las amortizaciones de su inmovilizado correspondiente a los ejercicios 1988 y 1989, que debió ser considerada "Resultados extraordinarios". La aplicación se realiza incluyendo la dotación del ejercicio 1990, por un importe conjunto, para los tres años, de 6.736 millones de pesetas.

d) Para verificar la coherencia clasificatoria entre las rúbricas de la cuenta de resultados corrientes y sus correspondientes presupuestarias, comerciales o del balance, se ha elaborado el anexo I-16, cuyo análisis ha puesto de manifiesto que:

- Las diferencias en existencias iniciales y finales se producen, en su práctica totalidad, en el Consorcio de Compensación de Seguros, debido a la peculiaridad contable de sus provisiones técnicas tanto en lo que se refiere a la cuenta de resultados corrientes como al anexo de operaciones comerciales[71].

- Las diferencias en compras se deben, en su mayor parte, al efecto de la reclasificación de las operaciones comerciales a que se ha hecho referencia en el anterior apartado I.4.1.2, con especial significación cuantitativa en los Organismos Caja Postal de Ahorros, ONLAE, Aeropuertos Nacionales, CSIC y Consorcio de Compensación de Seguros, por importe de 77.282, 45.900, 9.086, 8.005 y 4.351 millones de pesetas, respectivamente; como consecuencia de ello se producen diferencias paralelas, pero de signo contrario, en gastos de personal -1.571 millones del CSIC-, en gastos financieros -63.895 millones de la Caja Postal de Ahorros-, en transferencias corrientes y de capital -216 y 507 millones del CSIC- y en trabajos, suministros y servicios exteriores.

- El resto de la diferencia en trabajos, suministros y servicios exteriores se origina por la consideración como gastos de obligaciones reconocidas en el capítulo 6 "Inversiones reales", la activación de adquisiciones realizadas con cargo al capítulo 2, el no tratamiento contable como gastos de personal de los realizados con cargo al artículo 23 "Indemnizaciones por razón del servicio" y algunas otras causas por importes poco significativos.

- Las diferencias en transferencias corrientes se originan de una parte, por el tratamiento dado por el ONLAE a transferencias aplicadas al capítulo 4 de su presupuesto de gastos, por importe de 19.000 millones de pesetas, que se cargan a "patrimonio" y "reservas" como se hizo referencia en el anterior apartado I.4.2.2.A), y de otra, al tratamiento como resultados extraordinarios de 3 Juntas de Puertos y la CAGP de las transferencias a la Seguridad Social por la integración en ésta del Montepío de Puertos.

- Las diferencias en transferencias de capital se originan por el tratamiento en la Junta de Puerto de La Coruña y en la CAGP de las transferencias del Fondo de Compensación Interportuario, que en el primer caso se aplica a "Otros cargos" y en el de la Comisión se cargan a la cuenta de balance "Subvenciones de capital" como se puso de manifiesto en el apartado I.4.2.2.B) precedente.

e) Como se señala en el anterior apartado I.4.1.2., al menos el Servicio Militar de Construcciones y el INTA califican como compras en su cuenta de resultados corrientes gastos de distinta naturaleza, con la consiguiente distorsión de las cuentas rendidas.

B) Resultados extraordinarios.

El saldo acreedor de esta cuenta, en términos agregados, asciende a 43.190 millones de pesetas, estando formado por 13 Organismos con beneficios extraordinarios por importe de 44.273 millones y 21 Organismos con 1.083 millones de pérdidas.

Del análisis de los mismos destaca:

a) El FORPPA contabiliza en el ejercicio, como beneficio extraordinario, las anualidades de 1989 y 1990 de la póliza de crédito con el Banco de España asumida por el Estado en el ejercicio precedente, por un importe conjunto de 41.858 millones de pesetas, como se hace referencia en el apartado I.4.2.2.B) anterior.

b) Únicamente 3 Juntas de Puerto y la CAGP han dado la consideración de resultados extraordinarios al importe pagado a la Seguridad Social, de acuerdo con las normas emanadas en 1988 por la Dirección General de Puertos y Costas, por una suma de 339 millones de pesetas, ascendiendo la cantidad aplicada a resultados corrientes, por las 14 Juntas de Puerto restantes, a 1.254 millones de pesetas. El tratamiento heterogéneo de esta operación resta transparencia y consistencia a las cuentas rendidas.

c) Al igual que en ejercicios anteriores, el Parque Móvil Ministerial considera como beneficio extraordinario 528 millones de pesetas por la venta de inmuebles a los que da de baja en inmovilizado exclusivamente por las mejoras hechas en ellos desde 1987, debido a que, según su manifestación expresa, se desconocen sus valores de compra.

D) Resultados de la cartera de valores.

Esta cuenta con un saldo acreedor de 2.159 millones de pesetas, corresponde a la Caja Postal de Ahorros con beneficios por importe de 2.305 millones de pesetas y al CIEMAT con pérdidas por 146 millones. El Consorcio de Compensación de Seguros debería, asimismo, utilizarla, puesto que realiza operaciones de este tipo que aplica a su cuenta de resultados corrientes.

E) Modificación de obligaciones y derechos de ejercicios anteriores.

El saldo deudor de esta cuenta, en términos agregados, asciende a 2.569 millones de pesetas, importe que resulta de bajas netas en

[70] En este análisis se excluyen la Caja Postal de Ahorros y el Consorcio de Compensación de Seguros por las características de su actividad crediticia y aseguradora, respectivamente.

[71] Ver apartado I.4.2.1.B) anterior.

derechos por importe de 2.146 millones y altas netas en obligaciones por importe de 423 millones.

Entre las bajas de derechos destacan las del BOE, que anula por prescripción 745 millones de pesetas en deudores por operaciones comerciales, de los que únicamente estaban provisionados 4,5 millones y las correspondientes a las Confederaciones Hidrográficas, por un importe conjunto de 1.002 millones de pesetas, que se relacionan con el bajo índice de cobro de sus deudores puesto de manifiesto en el anterior apartado I.4.2.1.C).

Formando parte de la variación neta de obligaciones destaca la afloración de la deuda con CAMPSA correspondiente a los ejercicios 1985 y 1986 por importe de 663 millones de pesetas en el Parque Móvil Ministerial, a que se hizo referencia en el apartado I.4.2.2.D) precedente. Por otra parte, ENESA da de baja 28 millones de pesetas por obligaciones "estimadas" en el ejercicio 1988.

I.5.- APARTADO ADICIONAL. CUENTAS NO INCLUIDAS EN ESTADOS AGREGADOS.

I.5.1.- ORGANISMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS AGREGADOS DEL EJERCICIO 1990.

Los estados anuales agregados correspondientes al ejercicio 1990 no incluyen las cuentas de 19 Organismos autónomos -4 administrativos y 15 comerciales, industriales y financieros-, los cuales aparecen relacionados en el anexo I-17 con expresión de su situación en la fecha de redacción de este apartado (noviembre 1992) y de los defectos que impiden su inclusión en dichos estados anuales, según la información suministrada por la Intervención General de la Administración del Estado.

I.5.1.1.- Organismos cuyas cuentas ya han sido remitidas a este Tribunal.

En el anexo citado se aprecia que, de las 19 cuentas, 11 han sido remitidas a este Tribunal por la Intervención General de la Administración del Estado con la calificación de conformidad, a lo largo del periodo comprendido entre la rendición de la Cuenta General del Estado y el momento de redacción de este Informe.

Las cuentas remitidas corresponden a los siguientes Organismos: Agencia Española de Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, Mutualidad General Judicial, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Patronatos de Casas del Ejército y del Ejército del Aire, Juntas del Puerto de Algeciras y de Pasajes, Confederación Hidrográfica del Duero, Escuela de Organización Industrial e Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo está siendo objeto de un procedimiento de fiscalización independiente que incluye el ejercicio 1990 y cuyo Informe será emitido en breve plazo. La cuenta del Patronato de Casas (Ejército) y la de la Junta del Puerto de Pasajes están en proceso de revisión y sus resultados se incluirán en el Informe anual del ejercicio 1991. Las restantes cuentas han sido sometidas al programa de fiscalización establecido, que ha dado los siguientes resultados:

A) En cuanto a la regularidad formal:

En casi todos los Organismos la documentación complementaria (anexos y soportes justificativos) es incompleta y carece del detalle informativo exigido.

B) En cuanto a la liquidación presupuestaria:

- La Agencia de Cooperación Internacional recoge como derechos del ejercicio 260 millones de pesetas, correspondientes a créditos por transferencias corrientes del Estado que éste anuló, permaneciendo en la cuenta rendida a 31/12/90, como derechos pendientes de cobro, no obstante lo manifestado en las alegaciones relativo a su anulación en el ejercicio 1990. Por otra parte, ha duplicado el reconocimiento de 72 millones de pesetas en el citado concepto.

- La Mutualidad General Judicial recoge, al igual que en el caso anterior, derechos por transferencias corrientes del Estado, por importe de 298 millones de pesetas, que éste anula. Por otra parte, da tratamiento extrapresupuestario a 123 millones de pesetas correspondientes a este ejercicio y a 324 millones correspondientes a 1989, hechos efectivos, en ambos casos, por el Estado, con cargo a créditos presupuestarios, en 1990. Estos pagos corresponden a 2 Mutualidades integradas en el Organismo en el ejercicio que nos ocupa.

- El INAEM mantiene a 31/12/90 como "partidas pendientes de aplicación" 246 millones de pesetas correspondientes a pagos realizados en el ejercicio, en concepto de cuotas a la Seguridad Social, sin la correspondiente cobertura presupuestaria.

- La Escuela de Organización Industrial considera como operaciones comerciales 114 millones de pesetas correspondientes a gastos de personal y 53 millones de pesetas por trabajos, suministros y servicios exteriores que como tales son recogidos en su cuenta de resultados corrientes. La cuenta resumen de operaciones comerciales aprobada junto a su presupuesto recoge 65 millones para profesorado externo y 36 millones para publicidad, no obstante lo cual, la cuenta rendida recoge tanto en su fase de estimación como en la de realización todos los gastos como compras de mercaderías.

C) En cuanto a los balances de situación:

- La Junta del Puerto de Algeciras, como el resto de Juntas de Puerto, revaloriza su inmovilizado según los índices de precios al consumo. Dicha revalorización supone, a 31/12/90, el 55% de su activo revalorizado neto, y la revalorización del ejercicio supone el 63% de la variación neta del inmovilizado material.

En relación con el coste de la integración del Montepío de Puertos en la Seguridad Social, la Junta del Puerto de Algeciras presenta un activo ficticio de 224 millones de pesetas como importe del préstamo concedido por el Estado para afrontar parte de dicho coste de integración. El importe pagado directamente a la Seguridad Social es considerado como resultado ordinario[72].

Este Organismo, por otra parte, aplica a su cuenta de resultados corrientes del ejercicio, 206 millones de pesetas por gastos de conservación y mantenimiento recogidos en el capítulo 6 de su presupuesto, lo que pone de manifiesto su incorrecta imputación presupuestaria.

- La Escuela de Organización Industrial tiene un saldo acreedor de 214 millones de pesetas en la cuenta de "Deudores por otros ingresos comerciales", sin que se explique satisfactoriamente su causa.

- El INAEM incumple sus obligaciones con la Hacienda Pública, al no ingresar en el Tesoro las retenciones efectuadas por el IRPF y el IVA repercutido, que, según el saldo de las correspondientes cuentas de "Entidades Públicas", ascienden en 31/12/90 a 856 y 35 millones de pesetas, respectivamente.

Por otra parte, aplica a su cuenta de resultados corrientes en concepto de transferencias de capital y, por tanto, no activa, 70 millones de pesetas aplicados al capítulo 6 de su presupuesto de gastos, por inversiones en bienes de los que no ostenta la titularidad.

- El Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero considera como ingresos corrientes 780 millones de pesetas recibidas y aplicados presupuestariamente como transferencias de capital, con la consiguientes incidencia en el saldo de la cuenta de "subvenciones de capital recibidas" y en la de resultados corrientes.

- La Agencia de Cooperación Internacional, la Mutualidad General Judicial, el Patronato de Casas del Ejército del Aire y la Confederación Hidrográfica del Duero, no efectúan amortizaciones de su inmovilizado.

Respecto a la alegación referida a la amortización del inmovilizado de MUGEJU, hay que ratificar que en 1990 siguió sin hacer dotaciones por la depreciación de los bienes propios. La amortización acumulada y el incremento contabilizado en 1990 se refiere al inmovilizado de las Mutualidades que se integraron en ella en dicho año.

D) En cuanto a la cuenta de resultados:

En los apartados B) y C) anteriores se han realizado una serie de observaciones que inciden directamente en la representatividad de esta cuenta, no encontrándose otras cuestiones dignas de mención.

I.5.1.2.- Organismos cuyas cuentas se encuentran pendientes de recibir en este Tribunal.

Según se observa en el anexo I-17 a la fecha de redacción del Informe enviado a alegaciones no se habían recibido las cuentas de los siguientes Organismos: Trabajos Penitenciarios, Juntas del Puerto de Alicante, Melilla, Santander y Tarragona, Agencia Nacional del Tabaco, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Administración Turística Española. Es decir, un total de 8 Organismos de los 19 no incluidos.

Respecto a estas cuentas, una vez que se den por concluidas las actuaciones administrativas de las que se hará el oportuno seguimiento, serán adoptadas por este Tribunal las medidas que cada caso requiera de conformidad con las disposiciones aplicables.

I.5.2.- ORGANISMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS AGREGADOS DEL EJERCICIO 1989 Y ANTERIORES.

Según se expuso en el Informe anual del ejercicio 1989, en los estados anuales agregados no se incluían 23 Organismos autónomos - 3 administrativos y 20 comerciales-, de los que se habían recibido a la fecha de cierre de dicho Informe las cuentas de 9. Asimismo, a esa fecha quedaban pendientes de recibir las cuentas de 10 Organismos autónomos del ejercicio 1988 y de dos Organismos del ejercicio 1987.

La situación de estas cuentas -26 en total- se puede apreciar en el anexo I-18. A la fecha del presente Informe se han recibido 22 de ellas, correspondientes a los Organismos: Agencia de Cooperación Internacional, Agencia Nacional del Tabaco y Administración Turística Española del ejercicio 1989; Instituto de Cooperación Iberoamericana del ejercicio 1988; Trabajos Penitenciarios (1988 y 1987); Patronato de Casas Militares (Ejército), Patronato de Casas del Ejército del Aire y Confederación Hidrográfica del Duero (1989 y 1988); y Juntas del Puerto de Algeciras (1989), Alicante (1989 y 1988), Avilés (1989), Melilla (1988 y 1987), Pasajes y Santander (1988 ambas) y Tarragona (1989 y 1988).

[72] Ver a este respecto el apartado 1.4.3.1.B) de este Informe.

A esta fecha aún no se han recibido las cuentas de los Organismos Trabajos Penitenciarios y de las Juntas del Puerto de Melilla, Pasajes y Santander correspondientes a 1989.

Las cuentas del Patronato de Casas Militares (Ejército) de los ejercicios 1988 y 1989 y de la Junta del Puerto de Melilla de 1987 y 1988, están en proceso de revisión y serán objeto de comentario en el Informe de 1991. Las restantes cuentas recibidas han sido sometidas al programa de fiscalización establecido, que ha dado los siguientes resultados:

A) En cuanto a la regularidad formal:

El Organismo Administración Turística Española continúa en la cuenta del ejercicio 1989 con las graves deficiencias señaladas en el Informe anual de 1988. No aplica la Instrucción de Contabilidad de OOAA, no sigue el sistema de partida doble, no presenta adecuadamente la mayoría de los anexos y justificantes de sus cuentas anuales y sigue manteniendo un activo ficticio de 4.420 millones de pesetas. Como consecuencia de ello se considera que dicha cuenta no ha debido ser remitida a este Tribunal con la calificación de conformidad.

Prácticamente todos los demás Organismos presentan la documentación complementaria (anexos y soportes justificativos) incompleta y carente del detalle informativo exigido.

B) En cuanto a la liquidación presupuestaria:

- La Agencia de Cooperación Internacional, en el ejercicio 1989, y su antecesor, el Instituto de Cooperación Iberoamericano en 1988, reconocen derechos correspondientes a créditos anulados por el Estado por 78 y 60 millones de pesetas respectivamente.

C) En cuanto a los balances de situación:

Las Juntas de Puerto analizadas, como se ha señalado en informes y apartados anteriores, revalorizan su activo. Dicha revalorización supone porcentajes de su activo revalorizado neto que van desde el 47% en la Junta del Puerto de Tarragona, al 87% en la de Pasajes.

Al igual que en otras, cuatro Juntas de Puerto de las aquí contempladas, aplican en sus cuentas de resultados corrientes, 335 millones de pesetas por gastos de conservación y mantenimiento recogidos en el capítulo 6 de su presupuesto, lo que pone de manifiesto su incorrecta imputación presupuestaria.

En relación con el coste de la integración del Montepío de Puertos en la Seguridad Social, las Juntas del Puerto consideradas presentan un activo ficticio de 972 millones de pesetas como importe del préstamo concedido por el Estado para afrontar parte de dicho coste de integración. En todas ellas el importe pagado por cuotas aplazadas a la Seguridad Social es considerado como resultado ordinario.

En el conjunto, únicamente las Juntas de Puerto efectúan amortizaciones de su inmovilizado.

D) En cuanto a la cuenta de resultados.

Con excepción de las observaciones puestas de manifiesto en el punto C) inmediato anterior, con repercusión en la cuenta que nos ocupa, no se han encontrado otras cuestiones dignas de mención.

II. Análisis de la Liquidación de los Presupuestos del Estado y sus Organismos Autónomos

ÍNDICE

II.1 ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO
- II.1.1. Análisis por figuras modificativas
- II.1.2. Análisis económico
- II.1.3. Análisis orgáncio

II.2 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- II.2.1. Administración del Estado
- II.2.2. Organismos Autónomos

II.3 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
- II.3.1. Administración del Estado
- II.3.2. Organismos Autónomos

II.4 PRESUPUESTO FUNCIONAL

II.5 ANÁLISIS ESPECIAL DEL REFLEJO PRESUPUESTARIO DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ESPAÑA-COMUNIDADES EUROPEAS
- II.5.1. Presupuesto de ingresos
- II.5.2. Presupuesto de gastos
- II.5.3. Saldo de las relaciones financieras España - CEE

II.- ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

El art. 13.1 de la LOTCu establece como contenido del Informe o Memoria anual, entre otros, el análisis de la CGE y, más en concreto, el relativo al cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los presupuestos del Estado y de los Organismos autónomos, en cuanto entidades que están sujetas a régimen presupuestario público.

A este fin responde la presente parte del Informe, cuyos objetivos generales son la evaluación de la calidad de la presupuestación y de la eficacia en la ejecución de los presupuestos en sus vertientes orgánica, económica y por programas, todo ello en relación al Estado y a sus Organismos autónomos.

El análisis, al margen de esta parte introductoria, se estructura en cinco apartados. El primero está dedicado a las modificaciones de los créditos iniciales que se examinan bajo diferentes perspectivas analíticas. El segundo y tercero a la ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos respectivamente, expresando las causas de las desviaciones, así como de las variaciones de los gastos e ingresos del ejercicio respecto a los del ejercicio anterior. El cuarto apartado se refiere al presupuesto funcional o por programas; en él se ponen de manifiesto básicamente los resultados del análisis de la documentación relativa a los 13 programas seleccionados por la disposición adicional 15ª de la Ley de Presupuestos del ejercicio para la implantación de un sistema normalizado de seguimiento del grado de realización de los objetivos en ellos definidos. Finalmente, en el quinto apartado se hace una breve referencia analítica al reflejo presupuestario de las relaciones financieras de España con las Comunidades Europeas.

Los anexos II-1 a II-4 elaborados con la información suministrada por la CGE, constituyen los datos básicos de partida para el análisis; en ellos no figuran los relativos a los 19 Organismos autónomos (4 de carácter administrativo y 15 de carácter comercial) que se relacionan en el apartado I.1.1 anterior, al no haber sido incluidos -como allí se indica- en los estados anuales agregados.

Antes de entrar en el análisis detallado dentro de cada uno de los apartados a que se ha hecho referencia anteriormente, se efectúan unas consideraciones generales dirigidas, por una parte, a ofrecer una visión global de la ejecución de los presupuestos del Estado y de sus Organismos autónomos y, por otra, a aclarar algunos aspectos del trabajo realizado.

a) Con la información suministrada en las cuentas rendidas, se ha elaborado el cuadro que se inserta a continuación.

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS (EXCLUIDO CAPITULO 9) DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS [73].

(en millones de pesetas y %)

	PRESUPUESTO INICIAL			PRESUPUESTO LIQUIDADO			DESVIACIONES ABSOLUTAS			DESVIACIONES RELATIVAS		
	ESTADO (1)	OOAA (2)	TOTAL AGREGADO (3)	ESTADO (4)	OOAA (5)	TOTAL AGREGADO (6)	ESTADO (4)-(1) = (7)	OOAA (5)-(2) = 8	TOTAL AGREGADO (6)-(3) = (9)	ESTADO (7)/(1)	OOAA (8)/(2)	TOTAL AGREGADO (9)/(3)
Ingresos corrientes (Caps. 1 a 5) (A)	10.395.600	2.264.656 [74]	12.660.156	10.214.234	2.484.483 [75]	12.698.717	-181.366	219.927	38.561	-1,7	9,7	0,3
Gastos corrientes (Caps. 1 a 4) (B)	9.351.949	2.323.248	11.675.198	9.506.130	2.257.736	11.763.866	154.181	-65.513	88.668	1,6	-2,8	0,8
Rdos. Presup. por oper. corrientes (C) = (A) - (B)	1.043.651	-58.693	984.958	708.104	226.747	934.851	-335.547	285.440	-50.107	-32,2	486,3	-5,1
Ingresos por oper. de capital (Caps. 6 7) (D)	166.400	339.466	506.866	173.824	355.199	529.023	7.424	15.743	23.167	4,5	4,6	4,6
Gastos por oper. de capital (Caps. 6 7) (E)	2.066.504	395.386	2.461.890	2.035.648	360.440	2.396.088	-30.856	-34.946	-65.802	-1,5	-8,8	-2,7
Rdos. presup. por op. de capital (F) = (D) - (E)	-1.900.104	-55.930	-1.956.034	-1.861.824	-5.241	-1.867.065	38.280	50.689	88.969	2,0	90,6	4,5
Rdos. presup. por op. no financieras (G) = (C) + (F)	-856.453	114.623	-971.076	-1.153.720	221.506	-932.214	-297.267	336.129	38.862	-34,7	293,2	4,0
Ingresos por op. de activos financ. (Cap. 8) (H)	124.980	14.042 [76]	139.022	23.544	12.932	36.476	-101.436	-1.110	-102.546	-81,2	-7,9	-73,8
Gastos por op. de activos financ. (Cap. 8) (I)	313.661	30.118	343.669	185.683	16.842	202.525	-127.868	-13.276	-141.144	-40,8	-44,1	-41,1
Rdos. presup. por op. de activos financieros (J) = (H) - (I)	-188.671	-16.076	-204.647	-162.139	-3.910	-166.049	26.432	12.166	38.598	14,0	75,7	18,9
Rdos. presup. del ejercicio (Capitulos 1 8) (K) = (G) + (J)	-1.045.024	-130.699	-1.176.723	-1.315.859	217.596	-1.098.263	-270.835	348.295	77.460	-25,9	266,5	6,6

73 Incluye sólo los Organismos autónomos integrados en los estados anuales agregados enviados al Tribunal.

74 Excluida previsión inicial variación fondo de maniobra.

75 Incluidos resultados por operaciones comerciales.

76 Excluida previsión inicial remanente de tesorería.

Se trata de una síntesis de los resultados presupuestarios del ejercicio, excluido el capítulo 9 "Pasivos financieros", cuya consideración aquí carecería de sentido puesto que en él se recogen precisamente la variaciones en el endeudamiento del Estado y sus Organismos necesarias para cubrir, en su caso, la necesidad de financiación derivada de las restantes rúbricas presupuestarias[7]. Por tanto, cuando en los párrafos siguientes se haga referencia a "resultados", "superávit" o "déficit" debe entenderse que se refieren a los de carácter presupuestario (definidos en términos de obligaciones o derechos reconocidos y no de caja) y con la exclusión del capítulo 9 indicada.

De dicho cuadro -y sin perjuicio de las observaciones que se realizan posteriormente sobre la exactitud de sus cifras- se deduce que:

- Los ingresos corrientes del Estado en el ejercicio han sido 181.366 millones de pesetas, un 1,7%, menores que los presupuestados inicialmente, y los gastos corrientes mayores en 154.181 millones, un 1,6%, determinando, en consecuencia, que los resultados por operaciones corrientes hayan ascendido a 708.104 millones, frente a los 1.043.651 previstos, lo que supone una desviación negativa del 32,2%. Por el contrario, los ingresos y gastos corrientes de los Organismos autónomos han sido mayores y menores, respectivamente, que las correspondientes previsiones, en 219.927 y 65.513 millones de pesetas (9,7% y 2,8%), por lo que los resultados por operaciones corrientes han superado a los previstos en 285.440 millones, cifra que compensa en gran parte la desviación negativa producida en el Estado.

- Respecto a las operaciones de capital, los ingresos conjuntos del Estado y sus Organismos superan a las previsiones en 23.167 millones (un 4,6%) y los gastos son inferiores a éstas en 65.802 millones (un 2,7%). Consecuentemente el déficit conjunto derivado de estas operaciones (1.867.065 millones) ha sido menor que el inicialmente previsto (1.956.034 millones).

- Los ingresos y gastos por operaciones de activos financieros del Estado se han desviado por defecto de las previsiones en 101.436 y 127.868 millones, respectivamente (81,2 y 40,8%), careciendo de importancia las cifras correspondientes de Organismos autónomos.

- Como consecuencia de las desviaciones en los tres resultados parciales (corrientes, de capital, y de activos financieros), el déficit del Estado en el ejercicio, que asciende a 1.315.859 millones, ha superado al inicialmente previsto en 270.835 millones, lo que representa un 25,9% de desviación en términos relativos, mientras que en los Organismos autónomos, frente a un déficit previsto de 130.699 millones se ha obtenido un superávit de 217.596 millones con una desviación positiva de 348.295 millones (266%) que no sólo compensa la de signo contrario del Estado sino que permite que la liquidación presupuestaria agregada arroje un déficit menor en 77.460 millones que el inicialmente presupuestado, lo que supone una desviación relativa del 6,6%.

Estos datos como se ha indicado antes son los que aparecen en las cuentas rendidas. Sin embargo, a lo largo del apartado I de este Informe, particularmente en los epígrafes I.2.1 y I.3.1, se han puesto de manifiesto una serie de salvedades que afectan a la exactitud de aquéllos, y por tanto, a la de los resultados presupuestarios a que se ha hecho referencia en los párrafos procedentes, en la forma que se indica a continuación:

- El déficit del Estado deducido de las cuentas (1.315.859 millones), corregido por los gastos e ingresos realizados en 1990 y no aplicados al presupuesto, sufriría un incremento de 331.888 millones, diferencia entre los gastos no aplicados (353.122 millones, de ellos 272.625 corrientes, 70.414 de capital y 10.083 de activos financieros) y los ingresos no aplicados (21.234 millones, todos ellos corrientes). De ello se deduce que el déficit del Estado en el ejercicio, cuantificado de forma más exacta, alcanza una cifra de 1.647.747 millones de pesetas, que supone una desviación sobre el previsto del 58%. Debe aclararse, sin embargo, que una parte significativa del indicado incremento del déficit del Estado, concretamente 132.184 millones, es atribuible a operaciones de gasto o ingreso realizadas en ejercicios anteriores y regularizadas presupuestariamente en el ejercicio.

- El resultado positivo de los Organismos autónomos presentado en cuentas (217.596 millones) ajustado en el mismo sentido indicado anteriormente, sufriría una disminución de 232.188 millones, por lo que pasaría a ser negativo por importe de 14.592 millones con una desviación positiva sobre las previsiones del 89%, bastante menos favorable que el que se deduce de las cuentas (266%). Dicha disminución es debida principalmente a los 217.514 millones de prestaciones del INEM correspondientes al ejercicio y no aplicadas al presupuesto.*

- Como consecuencia de lo expuesto en los dos párrafos anteriores, el déficit conjunto del Estado y sus Organismos, una vez ajustado en la forma indicada, asciende a 1.662.339 millones frente al previsto de 1.175.723 millones. Se subraya que la desviación (41%) es debida, básicamente, a que se han realizado gastos corrientes notablemente mayores que los previstos, debiendo considerarse ampliamente incumplidas en este punto las previsiones de gasto contenidas en la Ley de Presupuestos.*

Para tener una idea exacta de los gastos e ingresos realizados hasta 31/12/90 pendientes de aplicación presupuestaria, habría que añadir, según se deduce de lo expuesto en los apartados I.2.1.3 y I.3.1.3 de este Informe, los correspondientes a ejercicios anteriores a 1990 aún no regularizados, que supondrán para el conjunto del Estado y sus Organismos una carga neta presupuestaria futura situada en torno a los 800.000 millones de pesetas, además de los 665.352 millones de pesetas de intereses de letras y pagarés del tesoro devengados y no vencidos a 31/12/90, y los 126.400 millones de devoluciones de IRPF e IVA correspondientes a la campaña de 1990 que se trasladan a 1991.

b) El análisis que se realiza en este apartado II, se hace a partir de las modificaciones de crédito, desviaciones y variaciones interanuales de los gastos e ingresos públicos más significativas, que son examinadas en relación a las causas que las producen, utilizando a tal fin la documentación obrante en este Tribunal y las aclaraciones complementarias solicitadas a los Centros Gestores, cuyas respuestas, en ocasiones, resultan incompletas e insuficientes.

Una de las razones más frecuentes alegadas por dichos Centros para justificar determinadas desviaciones presupuestarias negativas de las obligaciones reconocidas respecto a los créditos aprobados, es la limitación del gasto impuesta en cumplimiento del art. 10 de la Ley de Presupuestos ya comentada en otros apartados de este Informe[8]. En algunos casos, concretamente cuando el gasto no se ha realizado, ello constituye efectivamente una razón justificativa, pero la mayoría de las veces -como explicitan los propios gestores[9] y ha comprobado este Tribunal revisando la justificación de documentos contables aplicados al ejercicio 1991-, se trata simplemente de no contabilizar los gastos ya realizados para aparentar el cumplimiento del art. 10, con las consecuencias que se expresan en la introducción al apartado I.2.1 de este Informe, en el que se pone de manifiesto que se ha sobrepasado el límite marcado por dicho artículo.

c) Según se verá posteriormente, las inversiones reales del Estado y sus Organismos suelen presentar desviaciones, a veces significativas. Ello se debe, en general, al retraso en su ejecución que, en parte, viene compensado por la realización en el ejercicio de otras previstas en el ejercicio anterior amparadas presupuestariamente con la incorporación de los correspondientes créditos.

Para conocer en qué medida se realizan las inversiones previstas en el Estado se ha hecho un seguimiento de la información suministrada por el Subsistema de Proyectos de Inversión (cuya Instrucción Contable fue aprobada por Resolución de la IGAE de 28 de septiembre de 1987) contrastándola con la que aparece en el anexo de Inversiones reales del Estado y en el capítulo 6 del presupuesto liquidado, que forma parte de la CGE.

De dicho contraste se deduce que:

- Hay algunas discrepancias entre los datos contenidos en el Subsistema de Proyectos de Inversión y la CGE que deberían evitarse o aclararse en el futuro.

- El número de proyectos previsto en el anexo de Inversiones de 1990 asciende a 2.592. Sin embargo, del gasto total realizado según el Subsistema -921.461 millones- sólo 525.182 millones corresponden a proyectos incluidos en el anexo (1.849 proyectos) mientras que los 396.279 millones restantes están relacionados con 1.596 proyectos no incluidos en él. Por tanto, no debe confundirse el grado de ejecución presupuestaria del capítulo 6 considerado en este análisis, con el de las inversiones previstas en el anexo de Inversiones aprobado para el ejercicio que, por lo indicado, es notablemente inferior a aquél.

II.1.- ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

Las modificaciones de créditos del Estado y sus Organismos autónomos, cuyo detalle puede verse en el anexo II.1 ascienden a 3.359.902 millones de pesetas que se distribuyen en 3.172.338 millones para el primero (el 94% del total) y 187.564 millones para los segundos (el 6% del total). El citado importe global supone un 22% de modificación sobre los créditos iniciales, porcentaje inferior al de 1989 (un 28%) si bien para valorar el alcance de esta variación hay que desagregar la correspondiente a operaciones financieras y no financieras, dada la diferente significación de las modificaciones presupuestarias de unas y otras, según se pone de manifiesto más adelante.

De las modificaciones acordadas en el ejercicio, parte tuvieron lugar en el periodo de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 1989. Ahora bien, de éstas, cuyo importe total ascendió a 453.475 millones, únicamente continuaron produciendo efectos después del proceso de conversión 128.914 millones pues las restantes quedaron anuladas como tales modificaciones por haber sido consideradas en la elaboración del presupuesto definitivo.

Los programas que han sufrido modificación han sido 218 sobre un total de 237, cifra suficientemente indicativa de la relatividad del término "vinculante" en cuanto expresión de los efectos del presupuesto sobre el gasto público.

[7] Téngase presente que en el apartado I de este Informe se hace referencia a la liquidación presupuestaria completa (incluido capítulo 9) y que por esa razón los "Resultados de gestión presupuestaria" allí comentados difieren de los conceptos análogos que aquí se utilizan. Como se indica en las correspondientes introducciones, los apartados I y II responden a objetivos de fiscalización distintos.

[8] Ver apartados I.1.3 y I.2.1 anteriores.

[9] En la contestación a las aclaraciones solicitadas a los gestores se utilizan expresiones tales como "los documentos ADOK fueron rechazadas por la Intervención Delegada", "los documentos OK remitidos... no fueron grabados por el SICOP con el fin de cumplir el art. 10 de la Ley de Presupuestos para 1990" y otras del mismo sentido.

Como observación previa ha de manifestarse que la limitación global del reconocimiento de obligaciones establecida por el art. 10 de la LPGE, tal como ha sido entendida por la Administración, según se explica en otros apartados de este informe y el escaso rigor con que se aplica el principio de temporalidad del presupuesto ha desvirtuado en gran medida la conexión entre modificaciones presupuestarias y gastos. Las modificaciones han perdido su significado como expresión de los desajustes en las previsiones presupuestarias. Numerosos gastos realizados en el ejercicio no se contraen en cuentas, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad[40] con lo que resulta ociosa la modificación.

II.1.1.- ANÁLISIS POR FIGURAS MODIFICATIVAS.

a) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, figura cuya importancia relativa decrece en la medida en que aumentan las posibilidades de efectuar modificaciones vía ampliaciones y transferencias, han importado respectivamente 74.196 y 14.413 millones de pesetas, es decir, el 2% y 0,5% de las modificaciones totales. De los primeros, nueve, por un importe de 72.217 millones de pesetas, han correspondido al Presupuesto del Estado cuya concesión tiene lugar por Ley; por el contrario, los 1.974 millones restantes más todos los suplementos de crédito han tenido lugar en los Presupuestos de los Organismos autónomos.

Se trata de modificaciones que en el conjunto de las efectuadas no resultan especialmente significativas con la excepción acaso de dos créditos extraordinarios, por importes respectivos de 35.000 y 13.000 millones de pesetas, para hacer efectiva al personal de la Administración una paga única de 52.525 pesetas por diferencias producidas entre la inflación real y los incrementos de carácter general, y de otros dos por un importe conjunto de 9.000 millones con destino a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza[41], que en total representan el 77% de los autorizados en el Presupuesto del Estado.

b) Ampliaciones.

Lo primero que llama la atención en el examen de las operaciones de ampliación de crédito es el volumen. La importancia tanto absoluta (2.791.959 millones de pesetas) como relativa (83% de las modificaciones totales) justifica una especial vigilancia sobre las mismas. La ampliación crediticia supone las mayores excepciones a los efectos propios del presupuesto, ya que la fijación de la cuantía del gasto se deja para un momento posterior a su aprobación por las Cortes Generales. La tendencia al empleo excesivo de esta figura modificativa es indicio de una presupuestación deficiente, con el riesgo -expresado en el último párrafo del apartado I.1.3.2.a) anterior- de apartarse de la exigencia constitucional sobre la inclusión de la totalidad de los gastos públicos previstos en los PGE, o bien de una indisciplina inadmisible en la gestión de los fondos públicos, al alejarse de los derroteros marcados por la Ley presupuestaria.*

En el ejercicio 1990 los créditos de los Presupuestos del Estado y Organismos autónomos que han experimentado variación por esta vía han sido 291, en 10 de los cuales se concentra el 96% de las ampliaciones acordadas, todos ellos con incrementos no inferiores a 14.000 millones de pesetas. Dicho porcentaje se sitúa en el 99% si se consideran los incrementos producidos en los 24 créditos más afectados.

Para valorar esta situación es preciso ponerla en relación con las causas y destino de las distintas operaciones de ampliación efectuadas.

Los mayores incrementos se producen tradicionalmente en los créditos para pago de obligaciones derivadas de la amortización de la deuda pública y demás pasivos financieros. Un 84% de las ampliaciones han tenido este origen. La movilidad de los créditos para estas atenciones viene impuesta por el propio dinamismo de los mercados financieros y su respaldo legal se encuentra en la propia Constitución española en cuyo art. 135 se dispone que los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos. Lo anterior, empero, no justificaría que gastos previsibles queden excluidos en las consignaciones presupuestarias. Ahora bien, aunque se prescinda, por sus especiales características, de las ampliaciones en los créditos para operaciones financieras, ésta continúa siendo la figura más relevante en su aspecto cuantitativo: un 46% de las modificaciones experimentadas en los restantes créditos tiene este origen frente a un 38% que lo tiene en incorporaciones que es la figura que le sigue en importancia.

También en este segundo grupo (operaciones no financieras),cuyos incrementos ascienden a 448.866 millones de pesetas se produce una gran concentración. Son de destacar las siguientes aplicaciones:

- Un importe de 140.855 millones tiene su origen en transferencias a la Seguridad Social con destino a financiar operaciones corrientes del INSALUD (109.853 millones de pesetas), prestaciones socioeconómicas establecidas por la Ley de Integración Social de Minusválidos (25.000 millones de pesetas) o ayudas a la jubilación anticipada de trabajadores de empresas acogidas a planes de reconversión (6.032 millones).

- Un importe de 47.120 millones de pesetas han tenido como destino las transferencias a efectuar a Entes Territoriales del saldo resultante de la liquidación definitiva de su participación en los ingresos del Estado en los términos previstos en la Ley.

- Una cifra de 43.656 millones de pesetas ha ido destinada a subvenciones a la producción agraria financiadas por el FEOGA-Garantía.

- Destacan finalmente por su importancia cuantitativa las ampliaciones en los créditos para pago de haberes de Clases Pasivas (19.575 millones de pesetas) las cuales vienen motivadas en su mayor parte por insuficiencias producidas por las revalorizaciones establecidas en el propio articulado de la Ley.

Al lado de los mencionados existen otros créditos que llaman la atención más por su número que por el importe de las ampliaciones acordadas. De un total de 291 aplicaciones presupuestarias en las que se han producido ampliaciones, 267 no llegan a sumar el 1% de las mismas.

En relación con las operaciones de ampliación examinadas se observa lo siguiente:

1) En buena parte de ellas un mayor rigor en la presupuestación las hubiera hecho innecesarias al tiempo que la previsión sobre la actividad financiera contenida en los PGE hubiera ganado en realismo. Tanto su reiteración anual como la justificación que se aduce en los expedientes confirma esta apreciación.

A veces las obligaciones derivan de preceptos incluidos en el propio articulado de la Ley de Presupuestos o proceden de ejercicios anteriores con lo que difícilmente pueden calificarse de imprevisibles (Clases Pasivas, Cuotas Seguridad Social, transferencias a INSALUD, etc.)

2) En ciertas aplicaciones se efectúan ampliaciones sucesivas que no vienen provocadas por circunstancias o hechos nuevos, ya que en su devengo existe regularidad, sino más bien son función de las necesidades de tesorería de los perceptores. Por esta vía la Administración decide no sólo el momento del pago sino el del reconocimiento de la obligación y su contracción en cuentas con la consiguiente distorsión en la información económica y financiera que debe suministrar la contabilidad pública (art. 124 f) del TRLGP).

3) Por último hay que llamar la atención sobre el gran número de créditos que han sido objeto de ampliación, 291, y sobre su configuración que no siempre es concreta. Unos están especificados "de modo taxativo" en la LPGE, según previene el art. 66 TRLGP, pero otros lo están de forma genérica o de forma indirecta por razón de las obligaciones a reconocer cualquiera que sea su aplicación presupuestaria.

En vista de la situación existente, este Tribunal de Cuentas estima que sería positivo para el desenvolvimiento de la actividad financiera y para el control parlamentario sobre la misma hacer un uso más restrictivo de las ampliaciones de crédito y que su empleo se atenga a las previsiones del TRLGP, ley vertebradora del ordenamiento presupuestario, sin continuas excepciones a través de las leyes anuales de PGE.

c) Transferencias.

Las transferencias del ejercicio importan 333.789 millones de pesetas en aumento e idéntica cifra en baja. La expresada cantidad es casi la mitad de la del año precedente, disminución que tiene su explicación en la tardía aprobación del presupuesto y en las circunstancias excepcionales que concurrieron en el anterior plasmadas en el Real Decreto Ley 3/1989, de 31 de marzo, de medidas adicionales de carácter social.

Pese a la disminución indicada la modificación de créditos vía transferencias se ha empleado amplia y profusamente. En el ejercicio se han tramitado 851 expedientes de transferencia sobre un total de 1.671 expedientes de modificación. Su racionalidad no puede ser apreciada por lo general ya que en las propuestas de modificación no se pone de manifiesto normalmente si responden a un cambio de objetivos de los programas o a meras imprevisiones presupuestarias.

Contrariamente a lo ocurrido en anteriores ejercicios, se observa en el actual una disminución neta en los créditos para gastos corrientes en beneficio de los créditos para gastos de capital, siendo las modificaciones de los capítulos 4 y 7 las que han marcado este cambio de tendencia.

En el capítulo 4 "Transferencias corrientes" se produce una disminución neta de crédito de 46.990 millones y un aumento en el capítulo 7 "Transferencias de capital" de 45.279 millones. Por el contrario los créditos del capítulo 2 "Compras de bienes corrientes y servicios" han sido incrementados en 19.038 millones y los del capítulo 6 "Inversiones reales" disminuyen en 9.473 millones de pesetas.

Son especialmente significativas las transferencias efectuadas en el capítulo 1 "Personal" (con una disminución neta de 8.749 millones) con el consiguiente efecto distorsionador sobre la función de la Ley de PGE, según la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la determinación de plantillas de personal.

En el aspecto cuantitativo destacan las transferencias de las secciones 32 "Entes Territoriales" (72.184 millones de aumentos y 71.075 millones de bajas), y Defensa (56.440 y 52.909 millones respectivamente). Asimismo son de destacar, como receptores netos de crédito por esta vía, el MOPU, Educación y Ciencia, Agricultura, Pesca y Alimentación y Transportes, Turismo y Comunicaciones, y como cedente, la sección 31 "Gastos de Diversos Ministerios" que ha sufrido bajas por un importe de 116.380 millones de pesetas[42].

[40] Véase apartado I.2.1 de este Informe.

[41] Véase apartado III.8.3 de este Informe.

[42] Las causas de la evolución del gasto en estos y otros Departamentos se estudian en el apartado II.2.1 posterior de este Informe.

d) Incorporaciones.

Las incorporaciones de remanentes de crédito del ejercicio anterior, por un importe de 411.911 millones de pesetas constituyen la segunda fuente de modificación presupuestaria, representando el 12% de las de modificaciones totales y el 42% de las habidas en las operaciones no financieras. Respecto al ejercicio anterior se produce un leve incremento relativo, que se explica por las medidas restrictivas para la inversión pública en dicho año que adopta el Consejo de Ministros el 12 de mayo de 1989.

Los mayores incrementos presupuestarios por esta vía se producen en los capítulos de operaciones de capital por la demora que suele arrastrar la ejecución de las inversiones. El sistema de contabilidad de proyectos de inversión ofrece información que corrobora ampliamente esta apreciación[83]. Lo mismo resulta del análisis de las sucesivas incorporaciones a las que siguen cada año remanentes que al ejercicio siguiente vuelven a ser incorporados.

Una parte considerable de las incorporaciones han sido consecuencia directa de la previsión legal de incorporación de remanentes de crédito del Fondo de Compensación Interterritorial procedentes de dotaciones de los ejercicios 1982 a 1989 destinados a financiar proyectos de inversión de competencia de las Comunidades Autónomas (106.524 millones) a las cuales, en principio, son atribuibles las demoras en la ejecución, o bien tienen por objeto poner a disposición de dichas Comunidades fondos recibidos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (15.426 millones).

También son destacables las incorporaciones en Defensa (56.400 millones) que afectan tanto a gastos corrientes como a operaciones de capital.

e) Otras modificaciones.

Las generaciones de crédito obedecen a una variada gama de causas tales como reembolsos efectuados por la CEE, ingresos por sanciones, por ventas de productos y prestaciones de servicios, etc. que carecen de especial relevancia tanto si se consideran en conjunto (un 2% de las modificaciones) como de forma singularizada. La racionalidad en el empleo de esta figura ha de partir de una reglamentación de las condiciones de su aplicación tal como se puso de manifiesto en el apartado I.1.3.2 que garantice la consecución de la finalidad con que nació: fomentar la obtención por los gestores interesados de financiación para determinados fines.

II.1.2.- ANÁLISIS ECONÓMICO.

En el anexo II.1 se recoge la distribución por capítulos de las modificaciones presupuestarias agrupados a su vez en operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras.

Al igual que en años precedentes destacan las modificaciones en operaciones financieras que alcanzan 2.379.613 millones, lo que representa el 71% del total de modificaciones y un 177% sobre previsiones iniciales. En el capítulo 9 "Pasivos financieros" se concentran la casi totalidad de estas modificaciones fundamentalmente debidas a la amortización no prevista presupuestariamente de diversas emisiones de Deuda[84]. Por el contrario, en el capítulo 8 "Activos financieros" han resultado irrelevantes.

Los importes de las modificaciones efectuadas en operaciones no financieras, (capítulos 1 al 7) tanto en términos absolutos (980.289) como relativos (7%), y el número de créditos afectados son inferiores a los de los cinco ejercicios procedentes lo que en principio podría ser índice de una mayor disciplina presupuestaria; no obstante, hay que considerar como factor que impide sacar conclusiones homogéneas la incidencia de la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior y la tardía aprobación del ejercicio que tuvo lugar el 29 de Junio de 1.992.

En las operaciones de capital (capítulos 6 y 7) el incremento ha sido de un 17% en el Estado y más elevado en Organismos autónomos (25%). Resulta patente por segundo año consecutivo el esfuerzo de contención de las modificaciones de crédito en el capítulo 6 "Inversiones reales" del Presupuesto del Estado donde las más significativas se han producido vía incorporación de remanentes del ejercicio anterior ya comentadas, que obviamente han tenido especial incidencia en los Ministerios inversores (Defensa, Obras Públicas y Transportes, Turismo y Comunicaciones). Estas modificaciones han importado 126.988 millones de pesetas, lo que representa un 12% sobre créditos iniciales. En Organismos autónomos, por el contrario, los incrementos han representado un 23% y se han producido sustancialmente mediante incorporación, por análogas causas a las expuestas en relación al Estado (50.563 millones) o mediante ampliaciones (18.756 millones) cuyo origen suele estar en transferencias de los Departamentos ministeriales de que dependen.

En el capítulo 7 "Transferencias de capital", la consignación inicial se incrementa en 253.117 millones, que representan un 23% de la misma frente a un 25% en el año anterior. De la expresada cifra 27.746 millones corresponden a transferencias a Organismos autónomos cuya incidencia final en los programas de gasto se produce a través de los créditos de los Organismos receptores. La modificación más relevante ha tenido lugar en la sección 33 "Fondo de Compensación Interterritorial" que ha experimentado aumento por un importe de 121.951 millones de pesetas. A destacar también 14.801 millones en Administraciones Públicas, 9.000 millones en Cultura, 34.207 millones en Agricultura de los cuales 24.440 millones lo fueron con destino a transferencias a sus Organismos, en Industria y Energía 14.580 millones y en Economía y Hacienda 7.246 millones.

Los créditos de operaciones corrientes (capítulos 1 al 4) ven incrementadas sus dotaciones iniciales en un 4,6%, porcentaje inferior al de los cuatro últimos ejercicios. Dicho porcentaje, en principio, es indicativo de una mayor disciplina en el gasto corriente y de una presupuestación más realista que en años anteriores, si bien esta valoración ha de matizarse pues hay obligaciones del ejercicio que no aparecen contraídas en cuentas[85]. Dentro de estas operaciones, y siempre con la salvedad indicada, las mayores modificaciones en términos relativos se producen en el capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" (un 13,4%) y en términos absolutos en el capítulo 4 "Transferencias corrientes", 284.212 millones de pesetas, de las cuales 155.584 millones de pesetas corresponden a transferencias entre subsectores (5.763 millones de pesetas a Organismos autónomos, 149.397 a Seguridad Social y 327 millones a otros Entes) y 53.969 millones de pesetas a transferencias a Entes Territoriales. En el capítulo 2 destacan las modificaciones en Defensa con 30.835 millones de aumento sobre un total de 64.506 millones de pesetas, al que sigue Transportes, Turismo y Comunicaciones con 12.435, Economía y Hacienda con 5.453 e Interior con 5.369 millones.

Las modificaciones netas en los créditos del capítulo 1 "Gastos de Personal" han sido 86.882 millones de pesetas de aumento, que representan un 3,7% de los créditos iniciales, es decir, un porcentaje reducido. No obstante, tienen una especial importancia por su incidencia en determinados aspectos de la gestión de personal, incidencia que se produce no sólo por el incremento neto sino a través de las transferencias. En principio, la Ley de Presupuestos Generales del Estado cumple diversas funciones en relación a los gastos de personal:

a) Establecer en sus créditos un límite a tales gastos.

b) Determinar la cuantía de los distintos conceptos retributivos (art. 24 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública).

c) Fijar a través de los créditos las plantillas de personal (art. 14 Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública).

Dichas funciones, en la práctica, a través del mecanismo de las modificaciones presupuestarias quedan despojadas de contenido, con la consiguiente pérdida del control parlamentario sobre la política de personal. En particular son de señalar los siguientes hechos:

- La Administración puede modificar las relaciones de puestos de trabajo y a través de ello los complementos de destino y específicos sin atender a la existencia de dotación presupuestaria que únicamente habría de tenerse en cuenta a efectos de provisión de vacantes. Las insuficiencias de la contabilidad pública en este punto, que no informa sobre los créditos disponibles para cobertura de vacantes, hace que en la práctica se adecuen los créditos a los efectivos de personal de los distintos centros en lugar de adecuar estos a los créditos.

- El complemento de productividad tiene como únicos límites los créditos concedidos para tal fin por la Ley de Presupuestos y el porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa cuya fijación se deja por la Ley de Medidas a la de Presupuestos. Pues bien, dicho porcentaje no se viene fijando en la Ley y en relación a los límites crediticios, resulta de reducida eficacia desde el momento en que el Ministerio de Economía y Hacienda puede modificar tales créditos vía transferencias o, en los Organismos autónomos, vía suplementos de créditos, atendiendo a un criterio tan elástico como "el grado de consecución de los objetivos[86]".

- Finalmente es digno de mención el hecho de que 171 programas presupuestarios carecen de créditos iniciales para complementos de productividad, lo que demuestra que no incluyen el coste total de los puestos de trabajo asignados, según prevé el art. 14 de la Ley de Medidas. Se ha comprobado que este concepto retributivo, al menos en ciertos casos, se satisface a través de otros programas.

II.1.3.- ANÁLISIS ORGÁNICO.

La clasificación orgánica de los créditos permite su examen por centros responsables de su gestión.

La modificación neta de los créditos de los llamados "Grandes Centros Gestores", es decir, Ministerios y sus correspondientes Organismos autónomos -a los que se refiere exclusivamente este análisis orgánico[87]- ha sido en el ejercicio de 734.682 millones de pesetas, (7,48% de sus créditos iniciales), cifra y porcentaje sensiblemente inferiores a los de los últimos ejercicios (19% en 1988 y 10% en 1989).

Las mayores modificaciones en términos absolutos se producen en Agricultura, Pesca y Alimentación con 154.800 millones, en Sanidad y Consumo (120.300 millones de pesetas) y en Defensa (85.003 millones de pesetas). En el extremo opuesto se sitúan el Ministerio de Relaciones con las Cortes (1.489 millones de pesetas) y Asuntos Sociales (1.042 millones de pesetas).

---

[83] Véase la introducción al apartado III de este Informe.

[84] Véase apartado II.2.1 posterior de este Informe

[85] Véase la introducción al apartado II de este Informe.

[86] El sistema de seguimiento de objetivos se ha implantado aún sólo en 13 programas y los resultados obtenidos pueden verse en el apartado II.4 de este Informe.

[87] No se han computado las secciones 01 a 08 y 31 a 34 que no se corresponden con Departamentos ministeriales

En términos relativos, modificaciones sobre créditos iniciales, el abanico va desde un 25% en Agricultura, Pesca y Alimentación y un 20% en Cultura a un 2% en Trabajo y Seguridad Social y otro tanto en Asuntos Sociales. Son de destacar la reiteración en los tres últimos años de las desviaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en tanto que en los restantes no existe continuidad.

Desagregadamente, las modificaciones del subsector Estado significan 547.118 millones (un 74% del total de las modificaciones), mientras que las de Organismos autónomos representan 187.564 millones (un 26% del total), porcentajes de participación significativamente distintos en los tres últimos ejercicios. Por lo que se refiere a Organismos autónomos, el 78% de las modificaciones se concentra en los adscritos a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación (52% de las modificaciones del subsector), Educación y Ciencia (14%) y Economía y Hacienda (12%).

En el siguiente apartado II.2 se contienen menciones a los rasgos más destacados de las modificaciones de cada uno de los Departamentos Ministeriales y Organismos.

II.2.- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

El examen del anexo II.2 pone de manifiesto que, en términos globales, las desviaciones en el Presupuesto del Estado, equivalentes a los remanentes de crédito anulados, han importado 2.204.135 millones de pesetas (14% sobre créditos finales) y en los Organismos autónomos 316.290 millones (11%). Las variaciones interanuales, diferencia entre obligaciones reconocidas de los ejercicios 1990/1989, han supuesto en el Estado un incremento del 3% en tanto que en los Organismos ha sido del 8%, resultado de un aumento del 14% en los OAA y un -2% en los OACIF. Globalmente el aumento del gasto contabilizado es moderado, no obstante la valoración de este hecho requiere un análisis pormenorizado habida cuenta de la complejidad de órganos y actividades de la Administración, de la heterogénea composición del gasto, cuya evolución no admite una explicación unitaria, y de la existencia de gastos no contabilizados[48]. El mayor aumento relativo de obligaciones reconocidas en los Organismos autónomos respecto del Estado puede explicarse por no haberse visto estos directamente afectados por el límite del art. 10 de la LPGE.

II.2.1.- ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

En los anexos II-2.1 y II-2.2 se presenta la ejecución del presupuesto de gastos del Estado en el ejercicio 1990, en las vertientes dadas por las clasificaciones económica y orgánica.

Los créditos finales ascienden a 15.866.847 millones de pesetas y las obligaciones reconocidas a 13.662.712 millones, lo que supone un grado de ejecución del 86,1%. El remanente de crédito es de 2.204.135 millones de pesetas y si descontamos, por su incidencia especial en 1990, el producido en la sección "Deuda Pública" (1.468.060 millones) asciende a 736.075 millones de pesetas. La parte comprometida de dicho remanente se eleva respecto del ejercicio anterior y no es ajeno a ello el hecho del retraso en el reconocimiento de obligaciones ya comentado al hablar del art. 10 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990[49].

Las desviaciones más significativas, desde el punto de vista de la clasificación económica, se producen en los gastos por operaciones financieras con remanentes de 142.477 millones de pesetas en el capítulo 8 y de 1.391.275 millones en el capítulo 9 que se deben básicamente a la no utilización del crédito de 112.000 millones de pesetas para anticipo a cuenta de las deudas a cancelar con el Instituto de Crédito Oficial, en el caso del capítulo 8, y por lo que respecta al capítulo 9 a los motivos que se exponen posteriormente en el epígrafe "Deuda Pública".

En los gastos no financieros destaca el capítulo 6 "Inversiones reales" con un remanente de 231.766 millones de pesetas (20% del crédito total) del que un 88,4% corresponde a las inversiones de Defensa (102.572 millones), Obras Públicas y Urbanismo (57.866 millones) Transportes, Turismo y Comunicaciones (20.840 millones), Interior (13.256 millones) y Justicia (10.420 millones), si se atiende a la clasificación orgánica.

Paralelamente, en la clasificación por programas son los relativos a la Deuda Pública los más afectados, seguidos de algunos de los que gestionan los Ministerios inversores citados en el párrafo anterior, cuyo detalle se expone más adelante en el estudio individualizado de cada uno de éstos.

La variación interanual del gasto del Estado es del 3,2%. Si se consideran exclusivamente las operaciones no financieras dicha variación es del 10,7%. El crecimiento de los gastos corrientes es de un 9,9% y el de los gastos de capital de un 14,3%, destacando, entre estos últimos, el incremento del 19,6% en las inversiones reales. Este aumento de las inversiones se produce principalmente en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones por las causas que en relación a cada uno de ellos se indicarán.

Ya se ha dicho que el crecimiento del gasto es menor (un 3,2%) si se incluyen las operaciones financieras. Ello es debido básicamente a que en 1989 se concedieron préstamos a RUMASA, S.A. por 299.500 millones de pesetas, gasto que no se produce en 1990, y, además, a que en este ejercicio se redujo el gasto en amortización de deuda en 472.197 millones de pesetas.

Se señalan a continuación las desviaciones y variaciones en el gasto estatal clasificado por secciones presupuestarias (destacamos sólo las secciones en las que los datos resultan relevantes ya sea en términos absolutos o relativos).

SECCIÓN 06 - DEUDA PUBLICA

Los créditos iniciales ascienden a 2.364.683 millones de pesetas y los definitivos a 4.804.176 millones. Las modificaciones presupuestarias principales se producen para atender al canje de determinadas emisiones de deuda interior del Estado a medio y largo plazo (ampliación de crédito por la suma de 1.258.310 millones de pesetas) y para contabilizar presupuestariamente el saldo neto resultante de las emisiones y amortizaciones de pagarés del Tesoro (1.069.400 millones de pesetas).

El grado de ejecución presupuestaria es del 69,5%, siendo el remanente de 1.468.060 millones de pesetas, y el incremento interanual en las obligaciones reconocidas es del -8,8% (reducción de las mismas en 320.812 millones de pesetas).

Desviaciones presupuestarias.

El remanente en el programa 011 A "Amortización y Gastos Financieros de Deuda Pública Interior" asciende a 1.444.452 millones de pesetas y se debe fundamentalmente a las siguientes causas:

- La modificación de crédito por 1.069.400 millones de pesetas, antes citada resultó excesiva dado que las emisiones reales efectuadas hasta el cierre del ejercicio fueron superiores a las previstas en 273.733 millones de pesetas, produciéndose, por tanto, un remanente por dicha cantidad.

- La modificación de crédito por 1.258.310 millones de pesetas para atender el canje voluntario de determinadas emisiones de Deuda Interior del Estado a medio y largo plazo por Bonos del Estado, cuyas dotaciones iniciales no estaban consignadas en el presupuesto, generó un remanente de 1.105.365 millones de pesetas (un 88% de dicha modificación) al no haberse presentado al canje la mayoría de los tenedores de títulos previstos.

- Como consecuencia de las amortizaciones anticipadas se produjo un remanente en el concepto de intereses correspondiente de 18.637 millones de pesetas, a los que hay que añadir 42.128 millones presupuestados de más para las emisiones de 1990 y 124 millones para el resto de las emisiones.

- La falta de aplicación de los gastos de emisión de Deuda pública, produjo un remanente de 3.111 millones de pesetas[50].

Variaciones interanuales.

La disminución neta del importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1990 sobre las reconocidas en 1989 ha sido de 320.812 millones de pesetas, de los cuales 186.051 millones corresponden al programa 011 A "Amortización y gastos financieros de Deuda Pública Interior" y 134.761 al 011 B "Amortización y gastos financieros de Deuda Pública Exterior".

En el programa 011 A se ha producido un incremento en las obligaciones reconocidas del capítulo 3 de 159.074 millones de pesetas, debido fundamentalmente al mayor importe de saldos medios pendientes de reembolso por Deuda del Estado y Deuda del Tesoro en el ejercicio 1990 sobre los existentes en 1989, así como a la progresiva sustitución de Pagarés por Letras del Tesoro. En el capítulo 9, la disminución neta de obligaciones reconocidas sobre las del ejercicio anterior asciende a 345.125 millones de pesetas, siendo la razón principal de esta disminución, el menor importe de amortizaciones anticipadas de Deuda del Estado y Deudas asumidas sobre el efectuado en el ejercicio 1989, que queda compensado, en parte, por el incremento producido en 1990 en la diferencia entre amortizaciones y emisiones de Pagarés del Tesoro debido a la sustitución de éstos por Letras.

En el programa 011 B, durante el ejercicio 1989, se realizaron amortizaciones anticipadas de operaciones financieras con el exterior, circunstancia que no se ha producido en este ejercicio, lo que se refleja en una disminución en las obligaciones reconocidas del capítulo 9 de 127.071 millones de pesetas, existiendo en el capítulo 3 una disminución de 8.014 millones debida al menor importe de saldos pendientes por dichas amortizaciones anticipadas y a diferencias de cambio.

SECCIÓN 07 - CLASES PASIVAS

Los créditos iniciales ascienden a 543.261 millones de pesetas y los finales a 562.836 millones de pesetas. El grado de ejecución del presupuesto es del 98% y la variación interanual del gasto de un 14,5%.

Las modificaciones presupuestarias (19.575 millones de pesetas) se registran en los programas 314 B "Pensiones de Clases Pasivas" y 313 D "Pensiones de Guerra" y están destinadas a atender la insuficiencia de los créditos iniciales para el pago de pensiones de carácter militar y especial.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente total de la sección es de 11.871 millones de pesetas del que destacan 6.468 millones en el programa 313 D "Pensiones de

[48] Véase apartado I.2.1 de este Informe

[49] Ver introducción al apartado II de este Informe

[50] A 31/12/90 los gastos de emisión de Deuda Pública pendientes de aplicar al presupuesto de gastos ascendían a 29.733 millones de pesetas, como se hace constar en el apartado I.2.1.1.A.1) de este informe.

Guerra" capítulo 4, correspondiendo la mayor parte (4.311 millones de pesetas) al concepto 483 "Indemnizaciones Ley 46/1977" en donde se aprueban créditos por 5.000 millones de pesetas y se reconocen obligaciones por tan sólo 689 millones. Se trata de indemnizaciones en favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía, produciéndose la desviación referida por el retraso en el inicio del reconocimiento de las mismas por la falta de capacidad para tramitar el gran número de solicitudes recibidas, muy superior al de las previstas, y por la fecha de aprobación, 29 de junio de 1990, de la Ley de Presupuestos del ejercicio que las regulaba.*

Variaciones interanuales

El incremento del gasto (69.735 millones de pesetas) corresponde básicamente a la revalorización de las pensiones en un 8% y al incremento en el número de pensionistas de Clases Pasivas, civiles y militares, así como a la revisión de oficio de pensiones ya causadas, en virtud de lo dispuesto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989 y 1990.

SECCIÓN 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Los créditos aprobados inicialmente fueron de 72.381 millones de pesetas, y los finales suman 75.281 millones. Las modificaciones presupuestarias se producen principalmente en el programa 132 A "Acción Diplomática Bilateral" (incremento de 2.347 millones de pesetas) con la finalidad de financiar la adquisición y acondicionamiento de diversos edificios.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente de 5.770 millones de pesetas se concentra en los programas 132 A "Acción Diplomática Bilateral" y 132 B "Acción Diplomática Multilateral".

En el caso del programa 132 A, la desviación es de 1.052 millones de pesetas en las inversiones de la Dirección General del Servicio Exterior.

En la Dirección General de Organizaciones y Conferencias Internacionales, programa 132 B "Acción Diplomática Multilateral" se produce un remanente de 2.151 millones de pesetas (18,7% del crédito final) en el concepto 491 "Participación en Organismos Internacionales". Se trata del crédito para las cuotas obligatorias y voluntarias en favor de una serie de Organizaciones Internacionales.

Variaciones interanuales.

El incremento del gasto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en términos de obligaciones reconocidas, es de un 24% (13.327 millones de pesetas).

Aumentan en 1.022 millones de pesetas (incremento de un 44%) los gastos del capítulo 2 en el servicio 01, programa 131 A "Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores", debido a que se reconocen obligaciones pendientes de ejercicios anteriores por 808 millones de pesetas. Hay que destacar, además, que habiéndose presupuestado 403 millones para "Atenciones protocolarias y representativas" se transfieren 700 millones más (desde el crédito destinado en el servicio 06 al pago de cuotas a Organismos Internacionales), debido, según aclara el Centro gestor, a la "creciente actividad diplomática y mayor presencia de España en los Foros Internacionales". Parece evidente que los gastos derivados de la actividad diplomática no son tan imprevisibles como para que se produzca un margen de error del 174%.

Se incrementan en un 138%, al pasar de 2.781 millones en 1989 a 6.616 millones en 1990, las obligaciones reconocidas por inversiones de la Dirección General del Servicio Exterior, programa 132 A "Acción Diplomática Bilateral". El aumento de gasto referido se debe básicamente a obras y adquisiciones en la Embajada de París, y al gasto de 2.000 millones en la nueva sede de Washington.

Por último, se incrementan notablemente las transferencias de capital a la Agencia Española de Cooperación Internacional que alcanza la suma de 5.792 millones de pesetas representando un aumento del 210% respecto del ejercicio anterior.

SECCIÓN 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA

Los créditos iniciales son de 191.076 millones de pesetas y los finales de 198.992 millones de pesetas. Las modificaciones presupuestarias afectan principalmente a los programas 142 A "Tribunales de Justicia" y 144 A "Centros e Instituciones Penitenciarias" y corresponden a incorporaciones de remanentes del ejercicio anterior.

El grado de ejecución presupuestaria es del 91% y el incremento interanual en las obligaciones reconocidas es del 23%, lo que supone un aumento absoluto del gasto de 33.643 millones de pesetas.

Desviaciones presupuestarias.

Las obligaciones reconocidas ascienden a 181.350 millones de pesetas lo que implica un remanente de 17.642 millones de pesetas.

Un 60% de la desviación total en la ejecución del gasto del Ministerio se produce igual que en ejercicios anteriores, en el capítulo de las inversiones y principalmente en los programas 142 A "Tribunales de Justicia" y 144 A "Centros e Instituciones penitenciarias". En el caso del programa 142 A se trata de inversiones nuevas y de reposición en sedes de órganos judiciales en donde el remanente alcanza los 5.726 millones de pesetas (34,6% del crédito final) y se debe a la lentitud en la gestión de los contratos unida a la limitación de gastos impuesta por el art. 10 de la LPGE. De ese remanente están comprometidos 5.322 millones de pesetas.

En el crédito para inversiones (capítulo 6) de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, programa 144 A "Centros e Instituciones Penitenciarias" el remanente es de 3.939 millones de pesetas (35% del crédito total) del que están comprometidos 3.627 millones y en el capítulo 2 la desviación es de 2.441 millones de pesetas (19% del crédito total), estando comprometido todo el crédito. Aunque hay retrasos que se producen como consecuencia de lo dilatado de los plazos en la gestión de grandes obras y de la tramitación de los suministros, la limitación del gasto de la sección para dar cumplimiento al citado artículo 10 constituye la causa principal de dichas desviaciones.

La ejecución del programa 144 B "Trabajos Penitenciarios" es de tan sólo un 22% (de un 25,8% en términos de créditos comprometidos). Tratándose de creación de talleres y reformas para ubicación de los mismos en Centros penitenciarios no se justifican los retrasos en la ejecución.

Variaciones interanuales.

El incremento interanual 90/89 del gasto en la sección es de un 23% (aumento de 33.643 millones de pesetas). Los aumentos se producen principalmente, al igual que las desviaciones y a pesar de ellas, en los programas 142 A y 144 A en los capítulos 1 y 4.

En el programa 142 A "Tribunales de Justicia" hay un incremento en sueldos y salarios (capítulo 1) de 19.141 millones de pesetas lo que en términos relativos representa un 32%. Este aumento se debe, además de a los incrementos retributivos, al aumento de plazas en los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia. El incremento de 2.106 millones de pesetas (45,3%) en transferencias corrientes se debe a una subida del 31%, lo que supone 1.422 millones de pesetas, en la transferencia al Consejo de Abogacía Española para atender el turno de oficio y la asistencia letrada al detenido y a la dotación nueva de 700 millones de pesetas (de los que se han gastado 684 millones) para subvencionar a los Juzgados de Paz.

En el programa 144 A "Centros e Instituciones Penitenciarias" el aumento en el capítulo 1 es de 6.930 millones de pesetas (28%) y es debido a incrementos de plantillas en prisiones y servicios centrales y actualización de retribuciones.

SECCIÓN 14 - MINISTERIO DE DEFENSA

Los créditos iniciales suman 870.434 millones de pesetas y los finales 950.736 millones. Las modificaciones presupuestarias, que son equivalentes al 9,2% de los créditos iniciales, se registran principalmente en los programas 213 B "Potenciación y Modernización del Ejército de Tierra" (12.628 millones de pesetas), 214 H "Apoyo logístico al material del Ejército del Aire" (13.175 millones de pesetas) y 214 F "Apoyo logístico al material del Ejército de Tierra" (6.841 millones de pesetas). Se trata de incorporaciones de remanentes de crédito comprometidos del ejercicio anterior y generaciones y transferencias de crédito, que fueron acordadas para cubrir carencias en el mantenimiento de armamento y material de las Fuerzas Armadas.*

El grado de ejecución del presupuesto de Defensa es del 86,2% y la variación interanual en las obligaciones reconocidas es del -0,8%.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente en el Ministerio de Defensa asciende a 130.985 millones de pesetas. Dicha cantidad representa un incremento del 113% respecto del remanente del ejercicio anterior y no sólo hay un aumento del mismo en términos absolutos, sino que la ejecución del presupuesto es del 86% (inferior en 7 puntos porcentuales a la del año 1989 que fue del 93%).Del remanente indicado, se encuentran comprometidos 106.461 millones de pesetas y al menos 23.351 millones de pesetas corresponden a gastos que debieron contabilizarse en 1990[*1].*

Desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto, el remanente se produce básicamente en el capítulo 6 "Inversiones reales" (102.572 millones de pesetas).

Descendiendo a servicios, programas y capítulos destacan las siguientes desviaciones:

- En la Dirección General de Armamento y Material hay un remanente de 8.057 millones de pesetas (50,4% del crédito total) en el capítulo 6 del programa 542 C "Investigación y Estudios de las Fuerzas Armadas". Se trata de inversiones de carácter inmaterial (I+D) cuya falta de ejecución se debe a incertidumbres en los programas internacionales, dudas sobre el interés de los cuarteles generales en la utilización de algunos programas, falta de contratación por la incierta situación de algunas industrias nacionales y otras razones. Se trata, en este caso, de un excesivo desajuste entre presupuestación y las necesidades reales.

- En el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra hay un remanente en las inversiones del programa 213 B "Potenciación y Modernización del Ejército de Tierra" de 15.150 millones de pesetas (28,4% de crédito final).

[*1] Véase introducción al apartado II de este Informe

- En la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada hay un remanente de 8.300 millones de pesetas (16,7% de los créditos totales) en inversiones del programa 213 C "Potenciación y Modernización de la Armada" de los que 8.279 millones corresponden a gastos no contabilizados[92]. Y en el mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire las inversiones del programa 213 D "Potenciación y Modernización del Ejército del Aire" se ejecutan tan sólo en un 28%, quedando un remanente de 34.322 millones de pesetas, si medimos la ejecución por el grado de reconocimiento de obligaciones. En cambio el crédito comprometido alcanza al 99,2% del crédito final (47.156 millones sobre 47.516).

En los programas de Apoyo logístico al material del Órgano Central y a los 3 ejércitos se producen remanentes por 31.780 millones de pesetas la mayoría en inversiones.

Esos remanentes se deben a la aprobación tardía (en el mes de junio) de los Presupuestos Generales del Estado para 1990 y a los retrasos producidos en la contratación, aunque hay 2.352 millones de pesetas correspondientes a gastos de inversiones del programa 214 G "Apoyo Logístico al Material de la Armada" no contabilizados por la razón expuesta en la introducción al apartado II de este informe.

Variaciones interanuales.

No hay nada destacable en la variación interanual 1990/89 del gasto en el Ministerio de Defensa ya que los casos más importantes de incrementos o reducciones parciales del mismo se deben a una reorganización administrativa en la propia sección.

SECCIÓN 15 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Los créditos iniciales son de 404.162 millones de pesetas y los finales de 456.630 millones. Las modificaciones presupuestarias responden principalmente al crédito extraordinario a la Sociedad Estatal "Barcelona Holding Olímpico, S.A.", incorporaciones para adquisición de acciones de sociedades estatales y empresas nacionales, ampliaciones para campañas publicitarias sobre tributos y ampliaciones e incorporaciones para subvenciones a empresas localizadas en grandes áreas de expansión industrial.

El grado de ejecución presupuestaria es del 86,4% y el incremento interanual del gasto es del 28% con un aumento del mismo, en términos absolutos, de 85.455 millones de pesetas.

Desviaciones presupuestarias.

La desviación total es de 62.109 millones de pesetas correspondiendo los remanentes más significativos a los capítulos 6 "Inversiones reales" (9.233 millones de pesetas), 7 "Transferencias de capital" (15.904 millones de pesetas) y 8 "Activos financieros" (27.469 millones de pesetas).

En relación con las inversiones, en el programa 613 C "Dirección y Servicios Generales de la Administración Territorial de la Hacienda Pública" gestionado por la Dirección General de Servicios, se produce un remanente de 3.874 millones de pesetas (53,2%) como consecuencia de la limitación del gasto (art. 10 LPGE 1990). Por la misma razón hay una desviación de 4.618 millones de pesetas (25,2% del crédito final) en las transferencias de capital al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Sin embargo, en el programa 724 C "Incentivos Regionales a la localización Industrial" gestionado por la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales hay un remanente, en el capítulo 7, de 8.998 millones de pesetas (36,1% del crédito definitivo) de los que 3.643 millones corresponden a una aplicación indebida del art. 10[93].

En el programa 632 A "Financiación del Crédito Oficial" gestionado por la Dirección General Tesoro y Política Financiera se produce un remanente de 17.767 millones de pesetas en el capítulo 8 "Activos financieros". Este crédito tiene como único objetivo proporcionar fondos para financiar los créditos que el Gobierno concede con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). El importe de las obligaciones reconocidas se corresponde con las peticiones del ICO como administrador del FAD, según las necesidades de financiación de las obligaciones de pago derivadas del Fondo[94].

En el programa 612 F "Gestión del Patrimonio del Estado" gestionado por la Dirección General del Patrimonio del Estado se produce una desviación de 9.677 millones de pesetas en el capítulo 8 "Activos financieros". Del total de este importe, 9.372 millones de pesetas corresponden a una incorporación de remanente de crédito de 1989 para adquisición de acciones de la Compañía Telefónica.

Variaciones interanuales.

En relación con las obligaciones reconocidas en el ejercicio de 1989, las del año 1990 experimentan un aumento global de 85.455 millones de pesetas (28%). Atendiendo a la clasificación económica destacan los incrementos de los capítulos 4 (14.312 millones de pesetas, 68%), 6 (5.599 millones, 55%), 7 (13.521 millones, 26%) y 8 (47.142 millones, 41%).

En los capítulos 4 "Transferencias corrientes" y 7 "Transferencias de capital" se producen variaciones positivas de 7.400 y 7.634 millones de pesetas respectivamente como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Estadística en Organismo autónomo, lo que ocasiona la dotación "ex novo" de dichos créditos de transferencia y la desaparición en el resto de capítulos de gasto del Ministerio de los que eran gestionados por la Dirección General del INE, cuya cifra de obligaciones reconocidas en el ejercicio de 1989 ascendió a 10.871 millones de pesetas.

En la Dirección General de Servicios, capítulo 6 "Inversiones reales" se produce una variación positiva de 1.279 millones de pesetas en el programa 611 A "Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda". Esta variación se debe fundamentalmente a que con cargo al crédito de 1990 se hizo efectivo un número importante de las certificaciones de obras expedidas durante el ejercicio 1989.

En la Dirección General de Gestión Tributaria, capítulo 6 "Inversiones reales" se produce una variación positiva de 1.511 millones de pesetas en el programa 613 C "Dirección y servicios generales de la Administración Territorial de la Hacienda Pública". Esta variación se produce porque en el ejercicio 1989 este servicio-programa no contaba con crédito para inversiones (capítulo 6), considerándose todas ellas como gasto corriente de mobiliario y equipos informáticos. La variación real asciende a 381 millones de pesetas.

En la Dirección General de Planificación, capítulo 7 "Transferencias de capital", se produce una variación positiva de 2.301 millones de pesetas en el programa 612 B "Planificación, presupuestación y política fiscal". El importe de este crédito se destina a pagos del FEDER. La variación interanual obedece básicamente a que se incorporaron 4.015 millones de pesetas del ejercicio anterior.

En la Dirección General de Incentivos Regionales, capítulo 7 "Transferencias de capital" se produce una variación positiva de 2.199 millones de pesetas en el programa 724 C "Incentivos regionales a la localización industrial". Esta variación es debida, en parte, a que en 1990 se imputaron al presupuesto 1.246 millones de pesetas, que corresponden a obligaciones del ejercicio 1989, cuyos créditos se incorporaron al ejercicio siguiente.

En el programa 612 F "Gestión del Patrimonio del Estado", gestionado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, se produce una variación positiva de 3.044 millones de pesetas en el capítulo 7 "Transferencias de capital". Esta variación corresponde a un crédito extraordinario para completar la aportación del Estado a la Sociedad Estatal "Barcelona Holding Olímpico", S.A. (HOLSA). En el capítulo 8 "Activos financieros" el incremento es de 34.965 millones de pesetas, al pasar de 30.941 millones en 1989 a 65.906 en 1990. Esta última cifra corresponde básicamente a operaciones de suscripción o compra de acciones de Telefónica Internacional de España, S.A. (19.000 millones), EXPO-SEVILLA'92, S.A. (12.500), IMEPIEL (8.500), ENAUSA (8.000), HYTASA (4.300) y MERCO (4.000)[95]. En el programa 632 A "Financiación del crédito oficial", gestionado por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se produce una variación positiva de 12.233 millones de pesetas en el capítulo 8 "Activos financieros". Esta variación se debe a las mayores necesidades de financiación de los créditos concedidos por el Gobierno con cargo al FAD.

SECCIÓN 16 - MINISTERIO DEL INTERIOR

Los créditos iniciales suman 431.091 millones de pesetas y los finales 453.660 millones. Las modificaciones afectan básicamente a los programas 222 A "Seguridad Ciudadana" y 223 A "Protección Civil". El grado de ejecución del presupuesto es de un 95% (remanente de 23.716 millones de pesetas) y la variación interanual del 4,3%. Aunque en el gasto total conjunto del Ministerio no hay desviación ni variación significativa, señalaremos algunas destacables al descender a la clasificación orgánica o a la funcional.

Desviaciones presupuestarias.

Hay un remanente neto del 5% de los créditos totales que asciende a 23.716 millones de pesetas. Destaca en términos absolutos el programa 222 A "Seguridad Ciudadana" (13.917 millones) y en términos absolutos y relativos el programa 223 A "Protección Civil" (4.381 millones 35,7% de los créditos finales). En la clasificación económica y en términos absolutos el remanente se produce principalmente en las inversiones (13.256 millones de pesetas).

- En la subvención por gastos electorales de los partidos políticos que tenía un crédito de 2.500 millones de pesetas, se produce un remanente de 1.691 millones, como consecuencia de que no se abonó en 1990 la liquidación de las Elecciones Generales de 1989.

- En la Dirección General de Protección Civil, programa 223 A "Protección Civil" la desviación es de 4.381 millones de pesetas lo que representa un 35,7% del crédito total. En lo que se refiere a las inversiones de este programa (capítulo 6) el nivel de ejecución es de un 28,8% por lo que el remanente suma 1.879 millones. Ese remanente se produce porque no se han ejecutado en 1990 proyectos como el teléfono 006 de emergencia, la Red de Alerta Radioactividad, Red de Alarma Nacional, Equipamiento Riesgos, Instalaciones radioeléctricas y Dotación de medidas para los Planes de emergencia química. Otros proyectos se han ejecutado sólo en parte como la adquisición de material de transporte para la lucha contra incendios o los planes de emergencia nuclear.

En las transferencias de capital del mismo programa el grado de ejecución también es bajo (42% de los créditos), ya que se trata

[92] Véase introducción al apartado II de este Informe.

[93] Véase introducción al apartado II de este Informe.

[94] En la actualidad, el Tribunal de Cuentas está efectuando una fiscalización específica de los Fondos de Ayuda al Desarrollo.

[95] En el apartado I.2.3.1.C) anterior se hace una referencia más detallada a las operaciones de suscripción relativas a IMEPIEL e HYTASA, así como a sus efectos en la cuenta "Resultado de la cartera de valores" del Estado.

de subvenciones a Corporaciones Locales motivadas por siniestros o catástrofes en las que se ha producido retraso en el envío por parte de los Ayuntamientos de la documentación requerida. El remanente es de 1.841 millones de pesetas.

- En inversiones del programa 222 A "Seguridad Ciudadana" de la Dirección General de la Policía hay un remanente de 5.239 millones de pesetas (35,5% del crédito final) si bien 4.963 millones quedaron en fase de compromiso. De dicha cantidad, 882 millones no se imputaron como gastos al ejercicio de 1990 por las razones señaladas en la introducción al apartado II de este Informe.

En el mismo programa de "Seguridad Ciudadana" en lo que es competencia de la Dirección General de la Guardia Civil hay un remanente en inversiones de 5.359 millones de pesetas de las que 3.705 millones no se gestionaron por aplicación del art. 10 de la LPGE 90, debiéndose haber contabilizado como obligaciones reconocidas al menos 570 millones de pesetas.

Variaciones interanuales.

El incremento interanual del gasto en el Ministerio del Interior es de un 4,3%. No es por tanto un aumento considerable y sólo destacamos los siguientes incrementos concretos:

- Aumento de un 108,8% de las transferencias corrientes en la Dirección General de Protección Civil, programa 223 A "Protección Civil" que se produce básicamente por la existencia de una transferencia de crédito por la cuantía de 3.000 millones de pesetas en aplicación del Real Decreto-Ley 6/89, de 1 de diciembre, que adopta medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias torrenciales.

En el caso de las transferencias de capital (capítulo 7) se produce también un incremento del 162,1% (822 millones) debido a las atenciones a CC.LL. y familias en el caso de siniestros, catástrofes y otras de reconocida urgencia.

- En inversiones de la Dirección General de la Seguridad del Estado se produce un incremento relativo del 52,3% tanto porque se dispone de mayor crédito en 1990 como por la incorporación de remanentes del ejercicio anterior.

- Destaca un importante aumento de gastos de capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" en el programa 222 A "Seguridad Ciudadana" gestionado por la Dirección General de la Guardia Civil. El incremento es de 3.907 millones de pesetas (36,4%) y se produce básicamente en las rúbricas presupuestarias "Trabajos realizados por otras empresas", "dietas", y "gastos de traslados".

SECCIÓN 17 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Los créditos iniciales se cifran en 626.835 millones de pesetas y los finales en 680.885 millones, correspondiendo las modificaciones más importantes a incorporaciones de remanentes y transferencias de crédito, con destino básicamente a la reparación de los daños producidos por lluvias torrenciales. Estas modificaciones se producen básicamente en los programas 513 D "Creación de Infraestructura de Carreteras" (18.879 millones), 512 A "Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos" (9.595 millones) y 514 C "Actuación en la Costa y señalización marítima" (8.350 millones).

Las obligaciones reconocidas ascienden a 615.045 millones de pesetas (ejecución del 90%) y la variación interanual del gasto es del 31% con un incremento absoluto del mismo de 144.183 millones.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente total de crédito asciende a 65.840 millones de pesetas. El 72% del mismo se concentra en la Dirección General de Carreteras, que experimenta una desviación de 44.727 millones de pesetas en su capítulo 6 "Inversiones reales". De dicha cantidad, 34.347 millones corresponden al programa 513 D "Creación de infraestructura de carreteras", de los que 20.133 millones de pesetas se deben a obligaciones del ejercicio no contabilizadas y 10.380 millones al programa 513 E "Conservación y explotación de carreteras" de los que 3.161 millones se deben asimismo a obligaciones no contabilizadas.

En la Dirección General de Obras Hidráulicas, hay un remanente de 6.098 millones de pesetas en inversiones, de los que 5.721 millones corresponden al programa 512 A "Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos". De dicha cantidad, al menos 2.925 millones corresponden a obligaciones no reconocidas por lo expuesto en la introducción al apartado II de este Informe.

Variaciones interanuales.

El incremento interanual del gasto es de 144.183 millones de pesetas lo que supone en términos relativos un 31%. Esta variación se debe fundamentalmente al aumento del gasto en inversiones por un importe de 137.136 millones (43% de crecimiento relativo). De ellos corresponden a creación e infraestructura de carreteras 86.893 millones de pesetas y a conservación y explotación de las mismas 4.885 millones de pesetas.

En el programa 512 A "Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos" se reconocen obligaciones, por inversiones, superiores en un 43,1% a las del ejercicio anterior al pasar de 67.412 millones de pesetas en 1989 a 96.441 millones en 1990.

SECCIÓN 18 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Los créditos iniciales son de 975.683 millones de pesetas y los definitivos ascienden a 994.894. Las modificaciones por 19.210 millones de pesetas se registran, principalmente, en los programas 422 B "Educación General Básica" (8.126 millones) y 422 C "Enseñanzas medias" (8.437 millones) y la justificación se encuentra en las retribuciones del profesorado. El grado de ejecución es del 99,3%. No hay nada importante que destacar, en relación con las desviaciones. La variación interanual 90/89 del gasto en el Ministerio de Educación es de un 16% lo que supone un aumento de 135.178 millones de pesetas en las obligaciones reconocidas.

Variaciones interanuales.

Descendiendo al nivel de servicios, programas y capítulos cabe destacar lo siguiente:

- Disminuyen en 3.359 millones las transferencias corrientes al Consejo Superior de Deportes. Por el contrario, aumentan las de capital efectuadas a este Organismo y a la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar en 4.232 (45,7%) y 9.549 (16%) millones de pesetas, respectivamente.

- Aumentan un 185%, lo que supone 6.113 millones de pesetas de incremento, las transferencias de capital a las Universidades para realización de inversiones (infraestructura y equipamiento). Asimismo hay una nueva transferencia por valor de 1.474 millones destinada a la Comunidad Autónoma de Madrid para terminar las obras del campus de Getafe de la Universidad Carlos III. Las transferencias corrientes correspondientes al concepto 441 "A las Universidades para diversas atenciones" se incrementan en un 24,5% (17.429 millones de pesetas más que en 1989).

- Las ampliaciones de plantillas y mejoras retributivas del profesorado de EGB y de Enseñanzas Medias suponen incrementos en el capítulo 1 "Gastos de personal" de 21.671 y 29.004 millones de pesetas en los programas 422 B "EGB" y 422 C "Enseñanzas Medias", respectivamente.

- En la Secretaría de Estado de Universidades aumentan las transferencias corrientes a Organismos autónomos en un 24,6% y las de capital en un 21,5%. Se trata de un incremento superior a los 4.000 millones de pesetas, en la subvención al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del aumento de 1.573 millones en las transferencias de capital al citado Consejo y al Instituto de Astrofísica de Canarias.

- En el programa 541 A "Investigación Científica" se produce un aumento del 14,2%, lo que implica una variación de 2.199 millones de pesetas en las transferencias de capital para los programas Sectorial de Formación de Profesorado y Personal Investigador y de Promoción General del Conocimiento.

- El aumento del gasto en la Dirección General de Renovación Pedagógica es de un 24,7%, casi 9 puntos por encima del aumento global en el Ministerio. El programa 421 B "Perfeccionamiento del Profesorado de Educación" aumenta los gastos de capítulo 2 en un 33% (618 millones de pesetas).

- En el programa 321 A "Becas y Ayudas a Estudiantes" las transferencias corrientes crecen un 19% (9.398 millones de pesetas) debido al mayor número de becarios y aumento en la cuantía media de las becas y a la compensación a las Universidades por el incremento en el número de alumnos con exención de tasas.

SECCIÓN 19 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Los créditos definitivos ascienden a 1.043.573 millones de pesetas, después de unas modificaciones presupuestarias de los créditos iniciales por valor de 31.085 millones, debidas, básicamente, a ampliaciones de crédito destinadas a la integración social de minusválidos y ayudas equivalentes a la jubilación anticipada de trabajadores mayores de 60 años de empresas acogidas a Planes de reconversión. Las obligaciones reconocidas son de 1.027.075 millones de pesetas con lo que el grado de ejecución del presupuesto es del 98,4%. La variación interanual del gasto es de un -3,4%.

El gasto del Ministerio está constituido básicamente por transferencias al INEM, pensiones asistenciales, complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social y prestaciones socio-económicas derivadas de la Ley de Integración Social de Minusválidos.

Desviaciones presupuestarias.

No hay desviaciones significativas, salvo destacar que en la Dirección General de Cooperativas, programa 724 A "Desarrollo cooperativo" hay transferencias corrientes a Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales en las que se produce un remanente de 1.350 millones de pesetas (el crédito definitivo ascendió a 4.353 millones). De dicho remanente, más de 900 millones corresponden a transferencias de crédito autorizadas durante el mes de diciembre y 231 millones corresponden a propuestas de gasto fiscalizadas de conformidad que no llegan a la fase presupuestaria de reconocimiento de obligaciones por aplicación del art. 10 de la LPGE para 1990. Hay que señalar, sin embargo, que 38 millones de pesetas corresponden a gastos realizados en el ejercicio.

Variaciones interanuales.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hay una reducción aparente del gasto de un -3,4% aunque homogeneizando los ejercicios 1990 y 1989 y eliminando en 1989 las transferencias a Comunidades Autónomas e INEM como consecuencia de aportaciones del Fondo Social Europeo, el aumento del gasto es de 27.246 millones de pesetas (2,7% en términos relativos).

A continuación se realizan algunos comentarios sobre las variaciones más significativas:

- En el servicio 01 del Ministerio, programa 322 A "Promoción y Gestión de Empleo" hay una reducción del gasto en transferencias de capital a las Comunidades Autónomas de 5.938 millones de pesetas debido a que, según lo establecido en el Real Decreto-Ley 7/89, de 29 de diciembre, que prorrogó los Presupuestos Generales del Estado de 1989, los flujos financieros del Fondo Social Europeo se consignan directamente en los presupuestos de las Comunidades Autónomas. De la misma forma, las transferencias de capital al INEM para la ejecución de acciones y programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo desaparecen en 1990 de los Presupuestos del Estado (en 1989 supusieron 57.500 millones de pesetas). Ello es debido a que los fondos procedentes del FSE destinados a cofinanciar proyectos del INEM se aplican, en 1990, directamente al presupuesto de ingresos de este Organismo autónomo.

- En las obligaciones reconocidas por transferencias corrientes al INEM hay un descenso de 5.361 millones de pesetas.*

- En la Dirección General de Trabajo aumentan en 7.639 millones de pesetas (incremento relativo del 81%) las transferencias corrientes a la Seguridad Social para financiar las ayudas equivalentes a la jubilación anticipada de trabajadores (mayores de 60 años) de empresas acogidas a planes de reconversión. La presupuestación en este concepto resultó deficiente ya que se amplió el crédito en 6.032 millones con fecha de 3 de diciembre de 1990. Según señala el Ministerio, con dicha ampliación se "venían a corregir insuficiencias en las dotaciones presupuestarias habidas en dicho ejercicio y en años anteriores".

También aumentan en 1.049 millones de pesetas (22,4%) los gastos destinados a facilitar la jubilación de trabajadores de empresas en crisis no acogidas a planes de reconversión.

SECCIÓN 20 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Los créditos finales ascienden a 216.901 millones de pesetas siendo el grado de ejecución de un 92% y la variación interanual del -17%. Las modificaciones presupuestarias ascienden a 14.661 millones de pesetas de los que 7.663 millones se registran en el programa 723 B "Reconversión y Reindustrialización" y corresponden a incorporación de remanentes.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente total de la sección es de 16.894 millones de pesetas. Atendiendo a la clasificación económica, corresponde básicamente al capítulo 7 "Transferencias de capital" (11.457 millones de pesetas) y según la clasificación funcional destaca en el programa 731 F "Normativa y Desarrollo energético" (el grado de ejecución de este programa es de tan sólo el 36%). Concretamente en las transferencias de capital del citado programa, en la parte gestionada por la Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales, el remanente alcanza los 4.458 millones de pesetas (77% del crédito total) de los que 2.065 millones corresponden a demoras en la presentación de certificaciones de inversiones de proyectos subvencionados en el programa comunitario VALOREN y 2.393 millones de pesetas a la tardía regulación de las subvenciones para financiar obras de electrificación en zonas insuficientemente dotadas e inversiones en mejora de la calidad del servicio eléctrico.

Como obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio y no contabilizadas[*] se destacan:

- En el programa 542 E "Investigación y Desarrollo Tecnológico" y en las transferencias de capital, capítulo 7, gestionadas por la Subsecretaría y Servicios Generales, 970 millones de pesetas.

- En el programa 721 A "Dirección y Servicios Generales de Industria" y en el capítulo 6 "Inversiones reales", gestionadas por la citada Subsecretaría, 426 millones de pesetas.

- En el programa 741 F "Explotación Minera" de la Dirección General de Minas y de la Construcción y en el capítulo 7 "Transferencias de capital", 1.045 millones de pesetas.

Como desviaciones más significativas se destacan las que se comentan a continuación:

- En el capítulo 4 "Transferencias corrientes" del programa 731 F "Normativa y Desarrollo Energético", servicio 01 "Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales" se produce un remanente de 1.550 millones de pesetas, que es consecuencia de las medidas limitativas del gasto contenidas en la LPGE del ejercicio, concretadas en la no subvención de la producción de amoníaco y en el recorte (por O.M. de 27/12/90) de la asignación presupuestaria para subvencionar la producción de gases a un máximo de 650 millones de pesetas.

- En el capítulo 7 "Transferencias de capital" en la Dirección General de Industria se producen remanentes en los programas 722 C "Promoción de la Calidad Industrial" (400 millones de pesetas) y 724 B "Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial" (500 millones de pesetas), importes ambos que suponen la totalidad de los respectivos créditos de los que no llegaron a hacerse autorizaciones ni disposiciones. En estas desviaciones fueron determinantes las medidas restrictivas del gasto antes señaladas, además del retraso en la aprobación por la Comisión de la CEE del programa operativo de modernización industrial textil-piel, incluido en el programa 724 B.

[*] Véase introducción al apartado II de este Informe.

Variaciones interanuales.

En relación con las obligaciones reconocidas en el ejercicio de 1989, las de 1990 descienden en 40.817 millones de pesetas (disminución relativa del 17%). El descenso del gasto se produce en los capítulos 4 "Transferencias corrientes" con una disminución de 5.463 millones de pesetas y 7 "Transferencias de capital" con una disminución de 38.846 millones de pesetas.

Desde la perspectiva del presupuesto por programas, la reducción global del gasto referida es consecuencia básicamente de la compensación entre las disminuciones que se producen en los programas 723 A "Participación en Empresas" y 723 B "Reconversión y Reindustrialización" por importes de 32.000 y 20.011 millones de pesetas, respectivamente, y el aumento en el 542 E "Investigación y Desarrollo Tecnológico" por 10.699 millones. Los aspectos más significativos de estas variaciones se explican seguidamente.

En 1990 desaparece del presupuesto el programa 723 A, cuyos objetivos eran el saneamiento y reestructuración, en los casos necesarios, en el Grupo de Empresas del INI, por considerarse que los resultados del INI lo hacían ya innecesario. Esta participación se había reducido ya en un 47% en el ejercicio anterior, en el que el importe de las obligaciones reconocidas en el capítulo 7 "Transferencias de capital" alcanzó 32.000 millones de pesetas.

En el programa 723 B se producen los siguientes descensos de gasto:

- En el capítulo 7 "Transferencias de capital" la disminución de obligaciones fue de 16.590 millones de pesetas. Esta disminución es consecuencia de que algunos de los planes en que se concreta el programa van finalizando. Las rúbricas en las que la disminución de obligaciones es más acusada son la referida a Medidas Adicionales en la Siderurgia acordadas con la CEE (con un descenso de obligaciones de 15.706 millones de pesetas) y la referida a la Siderurgia Integral (que desciende 2.327 millones).

- En el capítulo 4 "Transferencias corrientes" se produce una disminución de 3.519 millones de pesetas al desaparecer la dotación presupuestaria que se destinaba a subvenciones al ICO para compensar quebrantos por avales y préstamos en reconversión industrial.

En el programa 542 E, como se ha indicado anteriormente, aumentan los gastos sobre todo en los capítulos 7 y 8 "Activos financieros", como consecuencia, básicamente, en el primer caso, de la aparición de un subprograma relativo a la creación de una base industrial y tecnológica medioambiental -dentro del cual se reconocieron obligaciones por 3.780 millones de pesetas-, y del incremento en 4.244 millones de las transferencias de capital correspondientes a incorporaciones de crédito del ejercicio anterior y, en el segundo, del incremento en 2.140 millones de los préstamos a empresas públicas para el desarrollo del AIRBUS.

SECCIÓN 21 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Los créditos finales suman 255.921 millones de pesetas y el grado de ejecución de los mismos es del 97%. Al comparar las obligaciones reconocidas con las del ejercicio precedente resulta un aumento del gasto del 54% (incremento absoluto del mismo de 86.855 millones de pesetas).

Las modificaciones presupuestarias ascienden a 57.706 millones de pesetas y son consecuencia de generaciones de crédito por reembolsos de la CEE para transferir a Comunidades Autónomas, e incorporaciones de remanentes.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente en el Ministerio de Agricultura alcanza la cantidad de 8.442 millones de pesetas y se produce básicamente en las inversiones reales (3.303 millones de pesetas, en términos absolutos, y 32% del crédito total en términos relativos) y en las transferencias de capital (3.881 millones de pesetas y 3% del crédito total).

Atendiendo a la clasificación funcional hay que destacar lo siguiente:

- En la ejecución del programa 712 A "Organización en Común de la Producción y Comercialización Agraria y Pesquera" por la Dirección General de Producción Agraria, se producen desviaciones en el capítulo 7 "Transferencias de capital" por importe de 553 millones al no haber enviado las Entidades la documentación fiscal necesaria para poder acceder a la subvención. En el mismo capítulo no pudieron reconocerse ayudas por importe de 634 millones debido, en parte, a que algunas agrupaciones no alcanzaron el volumen de actividades necesario para su calificación como Agrupaciones de Productores Agrarios (APA) y que por instrucciones de la CEE la ayuda suplementaria a la constitución de Organizaciones de productores de frutos de cáscara y algarroba, prevista para 1990 se trasladó a 1991.

- En la ejecución del programa 712 C "Mejora de los sistemas de producción agraria y pesquera" se producen nuevamente y por cuarto año consecutivo, retrasos considerables en la contratación de los trabajos para la implantación del Registro Vitícola Comunitario. El remanente, por este motivo, es de 1.205 millones de pesetas en el capítulo 6 "Inversiones reales". La gestión de estas inversiones corresponde a la Dirección General de Política Alimentaria.

Asimismo, en las transferencias de capital de este programa, gestionadas por la Dirección General de Relaciones Pesqueras

Internacionales se producen remanentes por importe de 191 millones de pesetas debido a demoras en la justificación, por parte de los beneficiarios, de las campañas experimentales de pesca objeto de subvención y por importe de 251 millones de pesetas por falta de solicitudes de ayuda y no concesión, por decisión de la Comisión de la CEE, de determinadas ayudas cofinanciadas.

- En la ejecución del programa 712 E "Comercialización, Industrialización y Ordenación Alimentaria" gestionado por la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias se produce un remanente de 1.153 millones de pesetas en el capítulo 7 cuya causa fundamental es el retraso en la justificación de la finalización de las inversiones subvencionadas en la línea de ayuda del RD 1462/86, de 13 de junio.

En las "Inversiones reales" gestionadas por la Dirección General de Política Alimentaria se produce un remanente de 602 millones de pesetas por demoras en la contratación y ejecución de las mismas.

Variaciones interanuales.

El incremento 90/89 de las obligaciones reconocidas es de 86.855 millones de pesetas (54%), destacando como variaciones más significativas las que se describen seguidamente:

- Las transferencias corrientes al FORPPA se incrementan en 5.339 millones de pesetas (951,3% de aumento) y las de ICONA en 1.823 millones (1.631% de crecimiento).

- Las transferencias de capital al IRYDA se aumentan en 29.717 millones de pesetas. Este crecimiento se debe a la necesidad de financiar la reparación de daños causados en diversas regiones por las lluvias torrenciales e inundaciones ocurridas en 1989.

- Finalmente, destaca el incremento de las obligaciones reconocidas en el capítulo 9 "Pasivos financieros" por valor de 41.858 millones de pesetas, que es debido, en su totalidad, a la aplicación presupuestaria en 1990 de las anualidades de amortización de la deuda del FORPPA con el Banco de España asumida por el Estado, correspondientes a los años 1989 y 1990[47].

SECCIÓN 22 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Los créditos finales suman 52.255 millones de pesetas y las obligaciones reconocidas, 39.544 millones. El remanente de 12.711 millones, se produce básicamente en transferencias a Corporaciones Locales, como consecuencia de la limitación del gasto impuesta por el Ministerio de Economía y Hacienda para dar cumplimiento al art. 10 de la LPGE 1990. La variación interanual del gasto es de un 35%.

Desviaciones presupuestarias.

Las transferencias de capital a las Corporaciones Locales para realización de servicios, obras e infraestructuras en general, que se gestionan desde la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, se cifran, en términos de crédito final, en 41.193 millones de pesetas. Se reconocen obligaciones por 29.416 millones (ejecución del 71,4%) debido a que el Ministerio de Economía y Hacienda, en aplicación del art. 10 de la LGPE, limitó la posibilidad de gastar todo el crédito si se comprometió en su mayor parte.

Variaciones interanuales.

El aumento, en términos absolutos, de las obligaciones reconocidas es de 10.357 millones de pesetas lo que supone un crecimiento relativo del 35%.

Dicho crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento en 7.501 millones de pesetas de las transferencias de capital a las Corporaciones Locales para hacer frente a los daños causados por inundaciones en varias provincias, según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/89, de 1 de diciembre, y Real Decreto 1113/89, de 15 de septiembre.

Otras variaciones, de menor cuantía, aunque destacables son:

- El aumento en un 47% de las transferencias corrientes al Instituto Nacional de Administración Pública que pasan de 1.222 millones de pesetas en 1989 a 1.794 millones en 1990. El Ministerio lo justifica por la necesidad de financiar el incremento del presupuesto de gastos de dicho Organismo autónomo, derivado de la potenciación de la acción formativa. Ahora bien, hay que señalar que el gasto del Organismo en términos de obligaciones reconocidas ha aumentado en 282 millones de pesetas y no en 766 millones como se previó en su presupuesto inicial y sirvió de fundamento para el incremento de las transferencias estatales.

- El incremento de las transferencias de capital al INAP en un 39% como consecuencia de las inversiones en la nueva sede del antiguo Hospital de San Carlos.

- El aumento de los gastos del capítulo 2 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública en 375 millones de pesetas, un 69%, que se debe al desplazamiento temporal de necesidades, a la lógica subida de los costes en términos monetarios, y sobre todo a las elecciones a órganos de representación del personal funcionario y laboral, para cuya financiación se efectuó una ampliación de crédito por valor de 400 millones de pesetas.

[47] En el Informe anual del ejercicio 1989, y concretamente en su apartado II.2.1, sección 21, se critica la falta de imputación presupuestaria de la anualidad de 1989, que se produce a pesar de la existencia del crédito correspondiente.

En dicha Secretaría de Estado, las inversiones aumentan de 88 millones de pesetas en 1989 a 737 millones en 1990 como consecuencia de la incorporación de remanentes comprometidos del ejercicio 1989.

SECCIÓN 23 - MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES

Los créditos iniciales ascienden a 594.551 millones de pesetas y los finales a 650.991 millones. Las modificaciones de crédito (56.440 millones de pesetas) se registran básicamente en los programas 513 A "Infraestructura del Transporte Ferroviario" (17.868 millones) y 521 A "Ordenación y explotación de los servicios de comunicaciones postales y telegráficas" (14.309 millones). Son modificaciones que proceden de incorporaciones de remanentes de crédito, de generaciones de ingresos por servicios prestados al Ministerio de Interior y a la Dirección General de Correos y Telégrafos, y de transferencias de créditos para cubrir insuficiencias en el capítulo 1 y para financiación del "Plan de Transportes de cercanías".

El grado de ejecución presupuestaria es del 93% y el incremento interanual del gasto del 0,4%.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente total de la sección es de 44.079 millones de pesetas de los que 20.840 millones de pesetas corresponden a inversiones reales y 11.873 millones a gastos en bienes corrientes y servicios.

En la ejecución del programa 513 A "Infraestructura del Transporte Ferroviario", gestionado por la Dirección General de Infraestructura del Transporte, se produce un remanente de crédito de 6.128 millones de pesetas en inversiones debido a que certificaciones de obra por importe de 5.308 millones, que fueron cursadas en 1990, no se contabilizaron.

Por la misma razón se explica un remanente de 2.665 millones de pesetas en gastos en bienes corrientes y servicios del programa 521 A "Ordenación y explotación del servicio de comunicaciones postales y telegráficas", gestionado por la Dirección General de Correos y Telégrafos.

En transferencias de capital del programa 514 D "Subvenciones y apoyo al transporte marítimo", gestionado por la Dirección General de la Marina Mercante, se produce una desviación de 3.179 millones de pesetas de los cuales 2.020 millones se deben a la no contabilización de una subvención concedida en diciembre de 1990.

El programa 515 B "Explotación del sistema de circulación aérea", gestionado por la Dirección General de Aviación Civil, tiene un bajo grado de ejecución ya que dispone de unos créditos totales de 31.148 millones de pesetas y el remanente suma 10.682 millones de pesetas. En el capítulo 2 de este programa la desviación es de 3.002 millones de pesetas por retrasos en la tramitación de expedientes y, por la misma razón, el remanente en inversiones es de 7.298 millones de pesetas.

Variaciones interanuales.

El incremento del gasto es de tan sólo 2.229 millones de pesetas (0,4%) aunque interesa comentar alguna variación ya que se compensan aumentos de las inversiones de un 44% (en valores absolutos 42.379 millones de pesetas) y de las transferencias de capital de un 7% (en valores absolutos 6.827 millones de pesetas) con reducciones de las transferencias corrientes de un 20% (en valores absolutos 53.076 millones de pesetas).

En relación con los aumentos de gasto hay que destacar:

La Dirección General de Infraestructura del Transporte experimenta una variación positiva de 21.017 millones en el capítulo 6 "Inversiones reales" del programa 513 A "Infraestructura del transporte ferroviario" al incrementarse el presupuesto por las inversiones previstas en el Contrato-programa Estado-RENFE 1988-91 (principalmente para el corredor Madrid-Barcelona), así como por las previsiones del Plan de Transporte de Cercanías (1990/92). Posteriormente también fueron aprobados créditos generados por ingresos procedentes del Organismo autónomo "Aeropuertos Nacionales" por un importe de 15.000 millones de pesetas para obras de infraestructura ferroviaria.

En el mismo programa 513 A aumentan en 4.957 millones de pesetas las transferencias de capital a RENFE, consecuencia de la aportación del Estado para inversiones, según se establece en el Contrato-Programa Estado-RENFE.

En el programa 515 A "Infraestructura de aeropuertos", aumentan las obligaciones reconocidas por inversiones en este ejercicio, respecto del anterior, en 11.873 millones de pesetas debido a una mayor dotación inicial y a una generación de crédito (también procedente de "Aeropuertos Nacionales") principalmente para las obras de los aeropuertos de Barcelona, Sevilla y Málaga como consecuencia de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo 92 en Sevilla.

En el programa 521 B "Ordenación de las telecomunicaciones y gestión y administración del espectro radioeléctrico" se produce una variación positiva respecto al año anterior de 6.746 millones de pesetas en el capítulo 6 "Inversiones reales" en la Dirección General de Telecomunicaciones, debido principalmente a la tardía aprobación de una ampliación de crédito en 1989 (4.000 millones de pesetas) que impidió el reconocimiento de obligaciones en aquel ejercicio, asumiéndose tal importe en el crédito inicialmente aprobado para 1990.

Las reducciones de gasto más destacables son:

- La que se produce en el capítulo 4 "Transferencias corrientes" del programa 515 D "Subvenciones y apoyo al transporte aéreo", gestionado por la Dirección General de Aviación Civil, que supone una disminución de las obligaciones reconocidas respecto del ejercicio anterior por importe de 3.493 millones de pesetas, debido a la reducción de los créditos definitivos al haberse aprobado en 1989 una generación de crédito de 5.000 millones para imputar al presupuesto un mayor importe de liquidaciones pendientes, mientras que en 1990 no se han ampliado los créditos iniciales. Como consecuencia de la disminución de obligaciones reconocidas se ha incrementado el importe de las liquidaciones pendientes por imputar al presupuesto al final de cada ejercicio: de 9.052 millones de pesetas al final de 1989 hasta 11.590 millones de pesetas al final del ejercicio de 1990.

- Los 57.997 millones de pesetas (descenso del 24%) en las transferencias corrientes a RENFE en el programa 513 B "Subvenciones y apoyo al transporte terrestre", consecuencia de que en 1989 se concedieron 2 créditos extraordinarios para jubilaciones anticipadas y déficit de explotación del año 1988 (por valor de 54.579 millones de pesetas), así como por la reducción que prevé el Contrato-Programa Estado-RENFE en el concepto de "Compensación y subvenciones".

SECCIÓN 24 - MINISTERIO DE CULTURA

Los créditos definitivos ascienden a 60.741 millones de pesetas y las obligaciones reconocidas a 56.041 millones (ejecución del 92%). La variación interanual es del 35,5%.

Las modificaciones de crédito representan un 21% de los créditos iniciales que eran de 50.153 millones de pesetas. Las más importantes son 2 créditos extraordinarios por valor de 9.000 millones de pesetas destinados al acondicionamiento del Palacio de Villahermosa y a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en concepto de fondo fundacional[*].

Desviaciones presupuestarias.

Destacan las desviaciones en inversiones suponiendo el remanente de 2.771 millones de pesetas un 22% del crédito final de las mismas.

En la Dirección General del Libro y Bibliotecas, programa 452 B "Bibliotecas" la desviación en las inversiones es de 713 millones de pesetas (20% del crédito definitivo). El citado importe es el que se desprende de la contabilidad rendida, no obstante lo alegado que hace referencia a una desviación de 203 millones de pesetas, según la documentación del Departamento. En la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, programa 458 C "Conservación y Restauración de Bienes Culturales" alcanza los 817 millones de pesetas (33% del crédito final). Se destaca, además, que una parte importante de las obligaciones reconocidas corresponden a inversiones no previstas en los anexos de Inversiones de los PGE para 1990. En esta última Dirección General no se contabilizaron 455 millones de pesetas correspondientes a gastos justificados antes del 31 de Diciembre de 1990 por las razones señaladas en la introducción al apartado II de este Informe.

Variaciones interanuales.

El aumento del gasto en el Ministerio de Cultura es de 14.674 millones de pesetas (variación interanual del 35,5%). La razón principal de este aumento se encuentra en los gastos derivados de la instalación en España de la colección Thyssen-Bornemisza, mencionados en el punto 2 del apartado III.8.3 de este Informe.

De menor cuantía que el anterior pero de importancia relevante son los siguientes incrementos de gasto:

- El que se produce en las transferencias corrientes al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) al pasar de 6.872 millones de pesetas en 1989 a 8.645 millones en 1990 (un 25,8%).

- El experimentado en las inversiones del programa 453 A "Museos" que aumentan un 93% (864 millones), correspondientes al Centro de Arte Reina Sofía por la realización de obras de rehabilitación, remodelación y adecuación en el Museo.

- El que se produce en la Dirección General de Cooperación Cultural por un importe de 143 millones de pesetas (aumento relativo del 247%) en gastos del capítulo 2, dentro del programa 134 B "Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el exterior". Asimismo, en el programa 455 C "Promoción y cooperación cultural" hay un aumento de gastos en el capítulo 7 de 465 millones de pesetas (930%), que está motivado, principalmente, por las transferencias de capital a Corporaciones Locales por la suma de 460 millones para promocionar actividades culturales.

SECCIÓN 27 - MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Los créditos finales ascienden a 37.733 millones de pesetas y las obligaciones reconocidas a 34.697. El grado de ejecución del presupuesto es del 92% y la variación interanual del gasto del 16,8%.

Desviaciones presupuestarias.

Por aplicación del art. 10 de la LPGE para 1990, el Ministerio de Economía y Hacienda estableció un límite máximo al reconocimiento de obligaciones en el Ministerio de Asuntos Sociales cifrado en 34.382 millones de pesetas, cantidad a la que se agregaron 331 millones de pesetas como consecuencia de generaciones de crédito.

El remanente de 3.036 millones, que se produce en esta sección es consecuencia, por tanto, de la decisión citada y una parte importante del mismo se da en transferencias corrientes (remanente de 1.370 millones) y de capital (remanente de 543 millones) al INSERSO.

Variaciones interanuales.

El gasto, en términos de obligaciones reconocidas, aumenta en 4.978 millones de pesetas (incremento relativo del 16,8%). Descendiendo a gastos concretos, se destaca un incremento de 445 millones de pesetas (crecimiento relativo del 114%) en publicidad y propaganda con motivo de la campaña sobre destino de la asignación tributaria en el IRPF.

En las transferencias de capital al Instituto de la Juventud se produce una variación interanual de 628 millones de pesetas (647,5% de incremento). La justificación dada reside en el mayor gasto de este Organismo debido a las transferencias nuevas que concedió en 1990 a las Corporaciones Locales, por valor de 600 millones de pesetas "para fomentar con medidas complementarias piloto el acceso de jóvenes a la vivienda en régimen estacional de alquiler".*

Aumentan en 3.000 millones de pesetas (5.500 millones en 1990 frente a 2.500 millones en 1989) las transferencias corrientes a las Comunidades Autónomas como consecuencia de lo acordado en los Convenios-Programa entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuyo objetivo es la creación y consolidación de una Red Básica de Equipamientos de Servicios Sociales de titularidad y gestión municipal, a través de un plan de actuación plurianual.

SECCIÓN 31 - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

En esta sección se recogen un conjunto heterogéneo de créditos destinados a hacer frente a actuaciones no previsibles o que corresponden a gastos cuya fragmentación entre diversos centros gestores no resultaría eficiente.

Los créditos definitivos en el ejercicio 1990, se elevaron a 276.693 millones de pesetas. Las obligaciones reconocidas suman 139.469 millones de pesetas (ejecución del 50,4%).

Desviaciones presupuestarias.

Se han producido remanentes de crédito por importe de 137.225 millones de pesetas (49,6% sobre los créditos definitivos), correspondiendo los más significativos al capítulo 4 "Transferencias corrientes" por importe de 5.091 millones de pesetas, capítulo 6 "Inversiones reales" por importe de 6.476 millones de pesetas y capítulo 8 "Activos financieros" por importe de 112.100 millones de pesetas.

En la Secretaría de Estado de Economía, capítulo 4 "Transferencias corrientes", se produce un remanente de 3.772 millones de pesetas en el programa 633 A "Imprevistos y funciones no clasificadas". Este crédito estaba destinado a transferencias al ICO para subvencionar créditos a los damnificados por inundaciones, pero no se utilizó siguiendo instrucciones cursadas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que asumió el pago de esas deudas con cargo a la operación que a continuación se indica, del capítulo 8, operación finalmente no ejecutada.

En la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, capítulo 8 "Activos financieros" se produce un remanente de 112.000 millones de pesetas en el programa 632 A "Financiación de Crédito Oficial". Este crédito se dotó para cancelar las deudas recíprocas entre el Estado y el ICO, si bien esta cancelación no pudo realizarse debido a la inadecuación del capítulo 8 del presupuesto de gastos para ejecutar dicha operación.

En el servicio 14 "Dirección General Patrimonio del Estado. Inversiones reales", capítulo 6 "Inversiones reales" se produce un remanente de 5.532 millones de pesetas en el programa 612 F "Gestión del Patrimonio del Estado". Este importe se debe fundamentalmente al retraso en la adjudicación y, por consiguiente, en la ejecución de determinadas obras que estaban presupuestadas para el ejercicio de 1990. Además, 322 millones corresponden a un documento "OK" no contabilizado, por las razones señaladas en la introducción al apartado II de este Informe.

Variaciones interanuales.

Las obligaciones reconocidas en 1990 experimentan una reducción respecto del ejercicio anterior de 283.404 millones de pesetas consecuencia principalmente de que en 1989 se cancelaron deudas de RUMASA, S.A. por 299.500 millones de pesetas, gasto que no se produce en 1990.

Los aumentos del gasto más destacados se producen:

- En el servicio "Dirección General de Presupuestos. Gastos de los Departamentos Ministeriales", capítulo 1 "Gastos de personal" del programa 633 A "Imprevistos y funciones no clasificadas" por un importe de 11.938 millones de pesetas. Esta variación corresponde a las dotaciones para las Mutualidades, fundamentalmente MUFACE, que fueron ampliadas en la medida necesaria para cubrir sus necesidades de tesorería[*].

[*] Véase apartado III.8.3 de este Informe

[*] En el apartado I.2.1.1.A.6) anterior se ponen de manifiesto las obligaciones del Estado con el mutualismo administrativo pendientes de aplicar al presupuesto.

- En la Dirección General de Servicios de Economía y Hacienda, capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" del programa 611 A "Dirección y servicios generales de Economía y Hacienda" por un importe de 4.245 millones de pesetas. Esta variación se origina por el retraso del periodo declaratorio del IRPF y Patrimonio en 1989, lo que produjo que se certificara la recepción y se tramitara el pago de los impresos de declaración en el ejercicio 1990. No obstante al haber tenido lugar el plazo de presentación de declaraciones en noviembre de 1989 dicha recepción de los impresos y la contracción en cuentas debió realizarse en este año.

SECCIÓN 32 - ENTES TERRITORIALES

El crédito inicial es de 1.819.364 millones de pesetas. Las modificaciones del mismo ascienden a 54.126 millones y se deben principalmente a la liquidación definitiva de la participación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en los ingresos del Estado correspondiente a 1989.

El gasto total asciende a 1.859.063 millones de pesetas, correspondiendo un 95% del mismo a transferencias a las Comunidades Autónomas (un 53,2%) y a las Corporaciones Locales (un 41,5%) por participación en ingresos del Estado. El grado de ejecución es del 99% y la variación interanual del 12,4%.

Desviaciones presupuestarias.

La desviación total es de 14.427 millones de pesetas (hay que tener en cuenta que en términos relativos es de tan sólo el 0,8 %) destacando, dentro de esa cantidad, una retención de 8.692 millones en el crédito destinado a transferencias corrientes al Ayuntamiento de Barcelona para apoyo y fomento del transporte colectivo con el fin de reducir el gasto y dar cumplimiento al art. 10 de la LPGE para 1990.

En este ejercicio no se ejecutaron los 500 millones de pesetas que se habían presupuestado en el servicio encargado de las transferencias a CC.LL, en el concepto destinado a la concesión de préstamos a dichas Corporaciones para hacer frente al cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 19/1987, de 17 de febrero, que declaró inconstitucional la libre fijación por parte de los Ayuntamientos del tipo de gravamen de la Contribución Urbana, Rústica y Pecuaria. En el año 1988 se reconocieron obligaciones, por ese motivo, por 30.129 millones de pesetas y en 1989, no habiéndose presupuestado inicialmente nada, se incorporó un remanente de crédito por valor de 2.000 millones de pesetas, del que se reconocieron gastos por 650 millones.

Variaciones interanuales.

No hay nada significativo que destacar pues el incremento en un 12,4% del gasto se debe básicamente a los aumentos en las cantidades destinadas a participación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en ingresos del Estado.

II.2.2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

En los anexos II.2.3 y II.2.4 se recoge la ejecución de los presupuestos de gastos de los organismos autónomos administrativos (OAA) y de los Organismos autónomos comerciales, industriales y financieros (OACIF)[111].

En los Organismos autónomos administrativos los créditos iniciales ascienden a 1.971.585 millones de pesetas y los definitivos a 2.070.428 millones. Un 72,5% de esos créditos iniciales corresponden al Instituto Nacional de Empleo, organismo en el que el 80% del gasto lo constituyen las prestaciones para el desempleo.

El grado de ejecución en los OAA es del 89% lo que supone un remanente total de 217.896 millones de pesetas. En términos absolutos los remanentes más destacados corresponden a los 10 Organismos administrativos siguientes, que absorben un 93% de la desviación total:

OAA	REMANENTE (millones de pts y %)	
	Absoluto	Relativo %
- Instituto Nacional de Empleo	70.822	5
- Junta de Construcciones Instalaciones y Equipo Escolar	33.566	35
- Fondo de Garantía Salarial	19.478	25
- Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria	16.069	34
- Gerencia de Infraestructura de la Defensa	14.907	64
- Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario	14.229	17
- Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado	10.672	12
- Consejo Superior de Deportes	9.753	27
- Jefatura de Tráfico	9.367	22
- Servicio de Extensión Agraria	3.656	32
TOTAL	202.519	10

Como se ve, el grado más bajo de ejecución presupuestaria corresponde a la Gerencia de Infraestructura de la Defensa (sólo ejecuta un 36% de su presupuesto) seguido de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar (ejecuta un 65%).

La variación interanual del gasto en los OAA es de un 14% debido a un incremento absoluto de las obligaciones reconocidas de 230.559 millones de pesetas. Destacan los incrementos de gasto del INEM (194.502 millones de pesetas, 17%), el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (7.203 millones de pesetas, 30%), el Instituto Social de la Fuerzas Armadas (7.310 millones de pesetas, 25%) y el Servicio de Extensión Agraria (4.341 millones, 123%).

En los Organismos Autónomos comerciales, industriales y financieros (los incluidos en los estados agregados), los créditos iniciales ascendían a 811.882 millones de pesetas y los créditos finales a 900.603 millones. Un 78% de los créditos finales corresponden a los 6 Organismos más importantes (FORPPA, ONLAE, Aeropuertos Nacionales, ICONA, CSIF y SENPA) absorbiendo el FORPPA y el ONLAE el 58% de los mismos.

El grado de ejecución presupuestaria de estos organismos, en lo relativo a su presupuesto administrativo, es del 89% (remanente de 98.393 millones de pesetas). La mayor parte del remanente corresponde a los 6 organismos siguientes:

OACIF	REMANENTE (millones de pts y %)	
	Absoluto	Relativo %
- Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado	28.581	13
- Servicio Nacional de Productos Agrarios	16.749	58
- Fondo de Ordenación y Regulación de Producc. y Precios Agrarios	10.533	3
- Instituto Nacional para Conservación de la Naturaleza	8.404	21
- Aeropuertos Nacionales	7.543	10
- Caja Postal de Ahorros	6.147	25
TOTAL	77.957	11,2

El grado más bajo de ejecución es el del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), seguido de la Caja Postal de Ahorros y el ICONA.

La variación interanual en las obligaciones reconocidas por los OACIF es de un -2% y se debe al descenso del gasto reconocido en los organismos Consorcio de Compensación de Seguros (-46.395 millones de pesetas), FORPPA (-26.926 millones) y SENPA (-11.679 millones)

A) Organismos autónomos administrativos.

- En la Gerencia de Infraestructura de la Defensa el grado de ejecución presupuestaria es de 35,6% ya que los créditos finales son de 23.162 millones de pesetas y las obligaciones reconocidas de 8.255 millones. La práctica totalidad del remanente se produce en inversiones. Se presupuestaron 20.496 millones de pesetas en inversiones destinadas a adecuar la infraestructura de la defensa al nuevo despliegue de las unidades de los ejércitos, con un aumento del 200% sobre la inversión presupuestada en 1989. Esa cantidad inicial pasa a ser de 22.721 millones como consecuencia de modificaciones del crédito, y el remanente resultó ser de 14.827 millones. La explicación es que la inversión va asociada a los ingresos por ventas de propiedades y al ser estos ingresos de tan sólo 2.544 millones de pesetas no pudieron realizarse más inversiones. La diferencia entre la cifra de estas inversiones y la de ingresos fue abonada con cargo a la tesorería existente a finales de 1989.

- En el Instituto Social de las Fuerzas Armadas destaca el incremento del gasto en un 25% al pasar las obligaciones reconocidas de 29.794 millones de pesetas en 1989 a 37.104 millones en el ejercicio de 1990. El aumento de gasto se produce en las prestaciones sanitarias (mayor coste de asistencia sanitaria, gastos farmacéuticos, precios de las pólizas con entidades concertadas, etc.). Hay que destacar, de todas formas, que al ejercicio de 1990 se imputan gastos por 2.386 millones de pesetas correspondiente a obligaciones de 1989 que por falta de crédito no fueron reconocidos.

- En el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria hay un remanente de crédito de 16.069 millones de pesetas. Este remanente se produce después de haber modificado al alza los créditos iniciales en 15.913 millones de pesetas. Concretamente las inversiones del Organismo se modifican al alza en 14.866 millones de pesetas, debido básicamente a la necesidad de aumentar en 10.677 millones de pesetas los gastos de conservación, actualización y revisión de los catastros de rústica y urbana (inversiones de carácter inmaterial, que en realidad son gastos corrientes), produciéndose al final una desviación de 14.306 millones de pesetas.

El incremento interanual del gasto es de un 30% (aumento absoluto de 7.203 millones) produciéndose principalmente en la actualización y revisión de los catastros.

- En la Jefatura de Tráfico destaca un remanente de 8.632 millones de pesetas en inversiones. De dicha cantidad, 6.730 millones corresponden a contratos adjudicados y no finalizados en el año (obras de infraestructura viaria en Sevilla, Barcelona y Madrid) y 1.902 millones de pesetas corresponden a inversiones previstas pero pospuestas.

[111] Excluidos los 4 organismos autónomos administrativos y los 15 Organismos autónomos comerciales, industriales o financieros que no forman parte de los estados agregados remitidos por la Intervención General de la Administración del Estado.

- En el Consejo Superior de Deportes el remanente es de 5.691 millones de pesetas en inversiones, con un grado de ejecución de las mismas del 46% y de 3.002 millones de pesetas en transferencias de capital (ejecución del 65%).

En lo relativo a las inversiones, la desviación corresponde básicamente al programa 457 B "Olimpiada de Barcelona" (5.287 millones de pesetas) en donde se recogen los créditos para hacer frente al Plan de Extensión de la Educación Física en el sistema de educación.

El remanente del capítulo 7 se produce básicamente por los retrasos en la justificación por parte de las Corporaciones Locales y de las Universidades de los gastos para instalaciones deportivas, que son gastos subvencionados por el Consejo.

El aumento del gasto en términos de obligaciones reconocidas, respecto del ejercicio anterior, es de un 23% siendo destacables aumentos del 90% de las inversiones en el programa 457 A "Fomento y Apoyo de las Actividades Deportivas" y del 157% de las inversiones del programa 457 B "Olimpiada de Barcelona".

- En la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar es significativo el remanente de 33.566 millones de pesetas de los que 33.165 millones corresponden a inversiones, que se ejecutan en un 62,7%. Hay que destacar que de ese remanente en inversiones, se encuentran comprometidos 26.061 millones de pesetas que se incorporan al ejercicio de 1991. Se trata de inversiones de los programas de Educación Preescolar, EGB, Enseñanzas Medias y Enseñanzas Universitarias en las que las certificaciones del mes de diciembre no se llevan a obligaciones reconocidas y en las que las obras se inician con retrasos al agotar las empresas adjudicatarias los plazos legales fijados para la formalización del contrato.

- En el INEM el remanente de crédito es de 70.822 millones de pesetas, no siendo significativo en términos relativos (5% de los créditos totales). Se produce en los programas 322 A y 322 B.

a) En el programa 322 A "Promoción y Gestión de Empleo" destacan las desviaciones del capítulo 4 "Transferencias corrientes". Concretamente hay subvenciones para medidas de fomento del empleo derivadas de acciones cofinanciadas con la CEE y subvenciones para la contratación de jóvenes menores de 26 años y otros colectivos, en los que por falta de normativa de desarrollo de dicha contratación no se realizaron créditos por la suma de 14.037 millones y 3.988 millones de pesetas respectivamente, y en el caso de subvenciones para el apoyo a la creación de empleo no se ejecutaron 3.244 millones de pesetas por la deficiente gestión durante 1990, reconocida por el propio Organismo, en las áreas de iniciativas locales de empleo, promoción de empleo autónomo e integración laboral del minusválido.

b) En el programa 322 B "Formación Profesional Ocupacional" hay un remanente de 30.230 millones de pesetas en capítulo 4 debido al dilatado proceso de gestión de la formación profesional ocupacional, proceso que se retrasó por la aprobación del presupuesto para 1990 en el mes de junio.

El incremento del gasto en el INEM es de 194.502 millones de pesetas (16,5% de aumento relativo) y en un 94% corresponde a aumentos en las transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro, debido al mayor gasto en cuotas de seguridad social y asistencia sanitaria de desempleados y subsidio por desempleo de los regímenes general y agrario.

- En el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) el grado de ejecución del presupuesto es del 74,6% lo que implica un remanente de 19.478 millones de pesetas. En el capítulo 4, en el pago de prestaciones a trabajadores, hay 9.418 millones de remanente debido a la recuperación económica del sector empresarial que se viene manifestando desde el año 1987. Se dio por tanto un exceso en la presupuestación.

En el capítulo 8 "Activos financieros" el remanente alcanza la suma de 7.167 millones de pesetas. El Organismo tiene presupuestados 15.130 millones de pesetas para la adquisición de Deuda Pública que no pudieron invertirse por falta de disponibilidad de tesorería.

La variación interanual de los gastos del FOGASA es del -21% (reducción de 15.246 millones de pesetas). El descenso del gasto se produce en el pago de prestaciones a trabajadores (-16.438 millones) resultando una caída importante debido a que en 1989 se imputaron a gastos del ejercicio 16.338 millones abonados en años anteriores con cargo a operaciones extrapresupuestarias en concepto de prestaciones y premio de cobranza a la Tesorería General de la Seguridad Social y en 1990 se cargan a presupuesto por la misma razón sólo 3.687 millones (2.669 millones de prestaciones y 1.018 millones de premio de cobranza).

- En el Servicio de Extensión Agraria el remanente de crédito es de 3.656 millones de pesetas (32% del crédito final). De dicha cantidad, 3.063 millones de pesetas están comprometidos como ayudas a agricultores jóvenes para instalación y modernización de explotaciones agrarias.

La variación interanual del gasto es de 4.341 millones de pesetas, lo que supone un aumento relativo del mismo del 123% y se explica por el incremento inicial de las ayudas citadas en un 26% y la incorporación del remanente del ejercicio de 1989 por la suma de 2.948 millones de pesetas.

- En el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) destaca un remanente de 10.575 millones de pesetas en el artículo 77 "Transferencias de capital a Empresas privadas". El crédito definitivo en dicho artículo ascendía a 34.979 con lo que la ejecución del mismo es de un 70%. Se trata de un crédito para ayudas a empresas privadas para modernizar explotaciones y compensar rentas en zonas desfavorecidas.

- En la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) destaca un remanente de 3.092 millones de pesetas en el capítulo 4, lo que representa un 25,4% del crédito final, y otro de 3.719 millones en el capítulo 8 (99,7% del crédito final).

En el caso del capítulo 4 la desviación, en un 95% se explica porque:

a) Se dotaron 500 millones de pesetas como consecuencia de un convenio entre MUFACE e INSERSO para atender a Servicios Sociales de mutualistas jubilados y minusválidos y el INSERSO no pasó ninguna facturación.

b) En el caso del subsidio de defunción, la previsión se había realizado aplicando las tablas de mortalidad del INE al colectivo, por grupos de edad, de los titulares del MUFACE, produciéndose un exceso de presupuestación de 1.233 millones de pesetas.

c) En los subsidios de intereses de préstamos se han recibido menos solicitudes de mutualistas de las previstas inicialmente, lo que produce un remanente es de 1.198 millones de pesetas.

La desviación del capítulo 8 (3.719 millones de pesetas) se debe a que no se invirtió la cantidad presupuestada para adquisición de deuda pública, como consecuencia del incremento del precio de las primas a pagar a las Entidades aseguradoras sanitarias.

La variación interanual del gasto es negativa por una cifra de 3.814 millones de pesetas (un 4,6%), y se produce básicamente por la disminución del gasto en el capítulo 8 "Activos financieros" en 13.438 millones de pesetas, compensada por un aumento en gastos del capítulo 2 relativos a asistencia médica, farmacia, prótesis y otras prestaciones por un importe de 7.720 millones de pesetas.

B) Organismos autónomos comerciales, industriales y financieros.

- En el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado se produce un desviación de 28.581 millones de pesetas (13,3% de los créditos finales). De esa cantidad, 22.798 millones corresponden a un remanente en las transferencias que se previeron realizar al Estado. La razón se encuentra en que se presupuestó una cantidad basada en unos resultados comerciales y variación del fondo de maniobra mayores de los efectivamente realizados.

El remanente en las inversiones del Organismo también es destacable (asciende a 4.596 millones de pesetas lo que representa el 82,5% del crédito total). Se presupuestaron inversiones, básicamente en el edificio para centro de escrutinios, y en máquinas codificadoras y sistemas de escrutinio, no habiéndose realizado, en 1990, lo previsto.

- En el Consorcio de Compensación de Seguros destaca un remanente de 1.431 millones de pesetas en los créditos del capítulo 4 destinados a reparar daños causados por inundaciones y lluvias torrenciales en diversas provincias. Después de aprobarse modificaciones por 3.000 millones de pesetas (una ampliación de 1.500 millones en la sección 31 y una incorporación de remanente de otros 1.500 millones en la sección 15) para transferencias al Consorcio, no es lógica la existencia del remanente indicado.

La variación interanual del gasto es de un -85% consecuencia de la reducción del mismo en 46.395 millones de pesetas. El descenso en las obligaciones reconocidas se explica básicamente por la disminución de las mismas en el capítulo 8 en la cantidad de 48.119 millones de pesetas debido a que en el ejercicio de 1990 los préstamos a CESCE dejan de ser operación presupuestaria, como lo eran en 1989, para realizarse extrapresupuestariamente. De igual forma, se contabilizan extrapresupuestariamente los préstamos recibidos del Estado para ese fin. Se produce, sin embargo una falta de conciliación ya que el Estado contabiliza presupuestariamente dicho préstamo al Consorcio de Compensación de Seguros.

- En el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) el grado de ejecución presupuestaria es de un 42% (hay un remanente de 16.749 millones de pesetas sobre unos créditos finales de 28.976 millones) y la variación interanual del gasto es del -49% (reducción de las obligaciones reconocidas en 11.679 millones de pesetas). La razón de la desviación y la variación se encuentra en que en el ejercicio de 1990 el Organismo no ha tenido que recurrir a la financiación mediante préstamos a corto plazo, con la consiguiente disminución del gasto presupuestario por amortizaciones y pago de intereses y la no utilización de los créditos dotados para estos fines.

- En el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) el grado de ejecución del presupuesto es del 79%, produciéndose el remanente (8.404 millones de pesetas) principalmente en los capítulos 3 "Gastos financieros" y 6 "Inversiones". En el caso del capítulo 3 la desviación es del 96% del crédito total y alcanza la cantidad de 1.547 millones de pesetas, debiéndose, en su mayor parte, a que se presupuestaron unos intereses a satisfacer al Banco Europeo de Inversiones por el préstamo concedido para la compra de aviones, intereses que vencían en enero de 1.991 y que por lo tanto no correspondían al ejercicio analizado. En lo que respecta a las inversiones hay un remanente de 1.537 millones, como consecuencia de un cambio de moneda más ventajoso para el Organismo que el previsto, en una compra de aviones en el exterior, y otro de 3.967 millones de pesetas consecuencia de retrasos en la realización de obras.

La variación interanual del gasto es del 58% (aumento de 11.509 millones de pesetas) y es debido en un 93% a la renovación de la flota de aviones contra incendios forestales.

- En el Fondo de Ordenación y Regulación de la Producción y Precios Agrarios (FORPPA) destaca en términos absolutos un remanente de 10.533 millones de pesetas, aunque no en términos relativos ya que supone sólo el 3% de los créditos totales. Corresponde, casi en su totalidad, a transferencias corrientes a Empresas privadas en concepto de subvenciones a la producción agraria con aportación del FEOGA.

Se produce, en 1990, un descenso de 26.926 millones de pesetas en las obligaciones reconocidas como resultado neto de un aumento en las transferencias corrientes a empresas (subvenciones FEOGA a la producción agraria) por valor de 51.142 millones de pesetas, un aumento en las transferencias al SENPA por importe de 14.073 millones, una reducción en las pólizas de crédito suscritas con el Banco de España de 90.418 millones de pesetas y una disminución en los gastos por intereses de 2.517 millones de pesetas además de otras variaciones por cantidades poco relevantes.

- En la Caja Postal de Ahorros el remanente representa el 25% de los créditos totales y suma 6.147 millones de pesetas. De dicha desviación, destacan especialmente 4.177 millones de pesetas como remanente de capítulo 6 "Inversiones reales" con lo que el grado de ejecución de estas es del 60%. Se trata de inversiones en adquisición de edificios, mobiliario y equipos informáticos. Concretamente, y en el caso de los equipos informáticos, se presupuestaron inicialmente 3.495 millones de pesetas y dicho gasto no ha sido realizado por la Caja Postal al encargarse de su realización una Sociedad filial.

- En el Organismo Aeropuertos Nacionales el remanente de 7.543 millones de pesetas se produce en sueldos y salarios (3.138 millones), en la transferencia de capital al Estado (2.000 millones), en las inversiones reales (1.650 millones) y en gastos en bienes corrientes y servicios (755 millones).

El gasto en Aeropuertos Nacionales aumenta en un 40% (incremento de 20.071 millones de pesetas). La explicación principal radica en el incremento en 16.000 millones de pesetas en las transferencias del Organismo al Estado, consecuencia de unos mayores ingresos en los Aeropuertos, ya previstos inicialmente en el resultado de operaciones comerciales y la variación del fondo de maniobra.

II.3.- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

En el anexo II.3 se recogen las desviaciones y variaciones interanuales en la ejecución del presupuesto de ingresos del Estado y de sus Organismos autónomos que son objeto de análisis en este apartado.

II.3.1.- ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Los derechos reconocidos netos imputados al Presupuesto de la Administración del Estado de 1990 (capítulos 1 al 8) alcanzan la cifra de 10.411.602 millones de pesetas, de los cuales el 49% corresponden al capítulo 1 "Impuestos directos" y el 39% al capítulo 2 "Impuestos indirectos". Por figuras impositivas concretas, el IRPF es el que absorbe el mayor porcentaje de la cifra reseñada (34%), seguido del IVA (24%), Impuesto sobre Sociedades (14%) e Impuestos Especiales (9%).

Desviaciones presupuestarias.

En relación con las previsiones presupuestarias, el importe de los derechos reconocidos netos (exceptuando el capítulo 9) arroja una desviación global negativa de 275.380 millones de pesetas (3%), que contrasta con las elevadas desviaciones positivas de ejercicios anteriores (13% en 1989, 11% en 1988 y 14% en 1987). La relación impuestos directos/impuestos indirectos, situada en las previsiones presupuestarias en el 111%, alcanzó finalmente el 126%, continuando la tendencia ascendente iniciada en años anteriores, dado el dispar comportamiento en la ejecución del IRPF (108%) y del IVA (92%).

El siguiente cuadro muestra algunas de las desviaciones concretas más significativas:

Imputación Presupuestaria	Concepto	Exceso/defecto S/prevision presupuestaria (en millones de pts.)	Grado Ejecución (%)
10000	IRPF	269.547	108
21000	IVA s/Importaciones	-129.639	89
21001	IVA s/Operaciones Interiores	-100.438	94
22602	Impuesto Especial s/Hidrocarburos	75.269	112
24000	Monopolios Fiscales (Petróleos)	-144.113	39
25	Impuestos sobre Tráfico Exterior	-16.899	89
30000	Venta de bienes	-10.543	57
31	Prestación de Servicios	-19.331	83
38	Reintegros	43.932	40
39101	Intereses de demora	40.630	173
42001	Transferencias Sup. Social, ejercicios anteriores	-58.674	0
45000	Transferencias de OOAA (Loterías)	-26.274	87
54101	Intereses de anticipos préstamos concedidos al ICO	-14.138	76
54102	Dividendos Telefónica	-10.710	51
54103	Dividendos Banco de España	73.167	157
54300	Otras participaciones en beneficios	-7.134	8
60000	Venta de solares	-10.697	3
61901	Venta otras inversiones reales	11.495	160
82701	Reembolsos préstamos concedidos al ICO	-111.978	0

Para la correcta interpretación de los datos contenidos en el cuadro anterior hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- La recaudación neta del IRPF en 1990 soporta las devoluciones de la campaña de renta de 1988 que fueron demoradas a este ejercicio por un importe de 326.000 millones de pesetas habiéndose trasladado a 1.991 parte de las de la campaña de 1989, por importe aproximado a 100.400 millones de pesetas, lo que tiene un efecto neto sobre dicha recaudación de -225.600 millones de pesetas[101].

[101] Ver apartado I.2.1.2 de este Informe.

- La recaudación neta por IVA no incluye devoluciones del ejercicio que se trasladan al siguiente por un importe estimado de 26.000 millones de pesetas[102].

- El Real Decreto 3/1990, de 6 de julio, suprime la renta del monopolio de petróleos trasladando su recaudación al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. La desviación negativa conjunta de ambos conceptos es de 68.444 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 98%.

- El concepto 420.01 "Transferencias a la Seguridad Social ejercicios anteriores" corresponde a los ingresos derivados del sistema de financiación de las competencias en materia de Sanidad y Servicios Sociales transferida a la Comunidad Autónoma del País Vasco, referida al ejercicio 1989, a cuyo presupuesto se imputaron ya los correspondientes derechos reconocidos. Se trata, por tanto, de una previsión defectuosa por duplicidad.

- El concepto "reembolso de préstamos del ICO" formaba parte de una operación de compensación de deuda entre el Estado y el ICO que no pudo ser llevada a efecto por el error en la presupuestación del correlativo concepto del presupuesto de gastos. Según se ha puesto de manifiesto en el anterior apartado II.2 (sección 31).

- En el apartado III.2 de este Informe se presentan los resultados del examen sobre los ingresos procedentes de la venta de bienes e inversiones reales del Estado.

Variaciones interanuales.

La cifra de derechos reconocidos netos imputados al ejercicio de 1990 en los capítulos 1 al 8 del Presupuesto de la Administración del Estado supone una variación absoluta sobre la correlativa del ejercicio 1989 de 556.241 millones de pesetas, el 6% en términos relativos. Por capítulos presupuestarios se observan las siguientes variaciones interanuales:

El capítulo 1 "Impuestos directos" es el que alcanza un mayor incremento en el importe de derechos reconocidos netos (412.669 millones de pesetas, 9%), en su práctica totalidad debido al IRPF (216.576 millones de pesetas, 7%) y al impuesto sobre sociedades (192.995 millones de pesetas, 15%). Por lo que respecta al IRPF el incremento citado se debe principalmente al crecimiento de la recaudación por retenciones sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales (23%) y por retenciones sobre rendimientos de capital (41%), este último por la incidencia del Real Decreto-Ley 5/1989 de 7 de julio, que establece un incremento del porcentaje de las retenciones sobre el capital mobiliario del 20 al 25% y explícita el sometimiento a retención de las cuentas financieras colocadas en Letras del Tesoro, seguros de prima única y cesiones de crédito. En cuanto al impuesto sobre sociedades, la variación producida se debe en gran parte tanto al Real Decreto-Ley 5/1989 citado como al Real Decreto-Ley 7/1989 de 29 de diciembre que incrementa los pagos a cuenta. Teniendo en cuenta el trasvase de devoluciones entre los ejercicios 1989,90 a 91 a que se hizo referencia en el anterior apartado II.3.1 la variación imputable al capítulo 1 ascendería hasta el 22% y la del IRPF hasta el 26%.

El capítulo 2 "Impuestos indirectos" presenta un incremento de 246.132 millones de pesetas (6%), centrado fundamentalmente en el IVA (153.190 millones de pesetas, 6%) y en los Impuestos Especiales sobre labores de Tabaco (28.632 millones de pesetas, 18%), y sobre Hidrocarburos (118.183 millones de pesetas, 20%), si bien hay que tener en cuenta lo referido en el anterior apartado II.3.1 relativo al Real Decreto 3/1990, de 6 de julio, por el que desapareció la Renta del Monopolio de Petróleos y se produjo el trasvase, desde tal momento, de su recaudación al citado Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Tratadas conjuntamente ambas figuras, se observa un incremento de los derechos reconocidos netos de 109.876 millones de pesetas (16%), de los cuales 31.877 millones de pesetas proceden de un ingreso extraordinario por la venta de existencias del Monopolio. Es de destacar también la variación negativa del Impuesto sobre Tráfico Exterior (Otros derechos arancelarios) por importe de 46.441 millones de pesetas, 15%, debido tanto al progresivo desarme arancelario derivado de la adhesión de España a la CEE, como a la desaceleración de las importaciones de bienes y servicios durante 1990, circunstancia que ha tenido también particular incidencia en el IVA.

En el capítulo 3 "Tasas y otros ingresos" se ha obtenido un incremento de 15.924 millones de pesetas, 5%, debido fundamentalmente a la variación positiva registrada en los intereses de demora (18.242 millones de pesetas, 55%), en las tasas de juego (13.041 millones de pesetas 30%), y en Otros ingresos diversos (8.986 millones de pesetas, 479%). El concepto "Reintegros", por contra, registra una disminución por importe de 24.526 millones de pesetas, 46%, si bien hay que tener en cuenta que en 1989 se produjo un ingreso extraordinario de 18.354 millones de pesetas procedentes de la CEE (liquidación aportación por IVA 1987) en tanto que en 1990 se han contabilizado únicamente 2.669 millones de pesetas por reintegros procedentes de la CEE (2.658 por devolución del Recurso PNB de Enero-Mayo y 11 por liquidación IVA 1987)[103].

El capítulo 4 "Transferencias corrientes" refleja una variación de 18.122 millones de pesetas (5%), entre cuyos componentes pueden citarse las transferencias de Loterías (10.980 millones de pesetas, 7%), Seguridad Social por competencias sanitarias y sociales transferidas al País Vasco (10.491 millones de pesetas, 17%), y el Cupo del propio País Vasco (3.496 millones de pesetas, 4%).

En el capítulo 5 "Ingresos patrimoniales" se observa una variación absoluta de 43.974 millones de pesetas, 16% en términos relativos, causada fundamentalmente por el comportamiento del concepto

[102] Ver apartado I.2.1.2 de este Informe.

[103] Ver apartado II.5.1.1) de este Informe.

Dividendos y Participación en Beneficios del Banco de España (128.492 millones de pesetas, 174%) y, en sentido contrario, del Instituto Nacional de Hidrocarburos (decremento de 90.549 millones de pesetas, 78%); En el primer caso es consecuencia del fuerte incremento de los beneficios de la Institución en 1989 respecto a 1988[44], en el segundo caso, la variación negativa se debe un ingreso extraordinario en 1989 de 104.000 millones de pesetas por la reprivatización parcial de REPSOL. Destaca también el ingreso por Dividendos y Participación en beneficio del ICO (14.707 millones de pesetas) sin correlación en 1989. Por intereses y préstamos concedidos al ICO y a otras empresas públicas, por su parte, se ha registrado una variación negativa de 8.186 millones de pesetas (15%).

En cuanto al capítulo 6 "Enajenación de inversiones reales", el presupuesto contabiliza una variación de 28.410 millones de pesetas (1.191%) debido en su práctica totalidad al ingreso extraordinario por la venta de oro y plata al Banco de España que se analiza en el apartado III.2 de este Informe.

El capítulo 7 "Transferencias de capital" refleja una variación negativa de 97.306 millones de pesetas (40%), concretada en las transferencias por FEDER (disminución de 53.624 millones de pesetas, 46%), FSE (47.963 millones de pesetas, 75%), FEOGA-Orientación (9.694 millones de pesetas, 37%) y Otras transferencias CEE (2.062 millones de pesetas, 36%), si bien la comparación no es homogénea ni representativa al venir incidida sustancialmente por la Orden Ministerial de 1 de febrero de 1990, que ha modificado la articulación presupuestaria de estas transferencias, excluyendo del Presupuesto de la Administración del Estado a las que corresponden a otros agentes del sector público.

Por último, el capítulo 8 "Variación de activos financieros" contabiliza una variación negativa de 111.684 millones de pesetas (83%), debida al reintegro por el ICO en 1989 de préstamos por importe de 118.000 millones de pesetas, sin operaciones similares en 1990.

II.3.2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Los derechos reconocidos por ingresos en los Organismos autónomos ascienden a 2.571.199 millones de pesetas de los que 2.045.131 millones corresponden a los Organismos administrativos y 526.068 millones a los comerciales, industriales o financieros. En esta última cifra no aparecen incluidas las operaciones comerciales cuyo resultado asciende a 312.925 millones de pesetas.

La fuente principal de financiación está constituida por las transferencias corrientes y de capital recibidas (1.331.624 millones de pesetas) de las que 932.467 millones de pesetas provienen de la administración del Estado y 399.157 millones de otras administraciones o entes.

Los principales receptores de transferencias corrientes y de capital del Estado son:

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO
(en millones de pesetas)

	CORRIENTES	DE CAPITAL
- INEM	508.119	11.689
- Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar	--	69.743
- IRYDA	--	65.548
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas	22.927	8.647
- Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria	11.510	18.269
- Consejo Superior de Deportes	15.546	13.501
- ICONA	1.935	19.830
- Instituto Nacional de Estadística	8.211	8.284
- Instituto de Relaciones Agrarias	10.080	--
- SENPA	9.200	450
- MUFACE	9.320	--
- Servicio de Extensión Agraria	1.143	7.070
- FORPPA	5.900	2.000
- Instituto de Salud Carlos III	6.813	970
- Parque Móvil Ministerial	6.010	696
TOTAL	616.714	226.697

El INEM recibió, además, transferencias de capital del Fondo Social Europeo por 66.734 millones de pesetas y el FORPPA recibió transferencias corrientes de la CEE por la suma de 301.501 millones de pesetas (del FEOGA-Garantía).

Los 15 Organismos autónomos señalados en el cuadro anterior absorben el 90% de las transferencias del Estado a todos los Organismos, destacando los 519.808 millones de pesetas recibidos por el INEM para atender principalmente a los gastos de desempleo, únicamente 21 Organismos autónomos de un total de 86 no han recibido financiación del Estado.

La segunda fuente de financiación viene constituida por el capítulo 1 del presupuesto, utilizado únicamente por los Organismos autónomos administrativos, con un importe, en este ejercicio, de 1.076.898 millones de pesetas, y un incremento de 18,5% respecto del ejercicio anterior. De esa cantidad, corresponden 938.472 millones al INEM por cotizaciones sociales al Desempleo y Formación Profesional, 59.460 millones a MUFACE por cotizaciones sociales del régimen especial de funcionarios, 34.565 millones a ISFAS por la misma razón y 44.400 millones al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) por cuotas empresariales.

En tercer lugar se encuentran las tasas y otros ingresos (87.475 millones de pesetas) cantidad que corresponde principalmente a la Jefatura de Tráfico (37.638 millones de pesetas) al INEM (8.991 millones de pesetas de los que 3.550 millones son reintegros por menores gastos de los previstos, en 1989), FOGASA (7.399 millones de pesetas de los que 4.322 millones corresponden a amortizaciones de cantidades invertidas en deuda pública y deberían haberse imputado al capítulo 8 de ingresos) y al Consorcio de Compensación de Seguros (6.511 millones de pesetas por recargo del 5 por mil sobre las operaciones de seguro directo y reintegro del remanente de tesorería de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras). El resto se distribuye en cantidades menores en múltiples organismos.

El remanente de tesorería en los Organismos autónomos administrativos y el resultado de operaciones comerciales y fondo de maniobra en los Organismos comerciales y financieros aportan circulante por un importe de 539.024 millones de pesetas que complementa la financiación de la liquidación presupuestaria resultante de comparar las obligaciones y los derechos reconocidos.

En los anexos II.3.1 y II.3.2 se pueden ver las desviaciones y variaciones en los ingresos de los Organismos autónomos atendiendo a la clasificación económica. En los Organismos administrativos destaca el exceso de los derechos reconocidos por el capítulo 1 de un 16% por encima de las previsiones. El aumento global de los ingresos es de un 15% respecto del ejercicio de 1989 correspondiendo ese aumento básicamente, y en términos absolutos, a capítulo 1 y a las transferencias de capital recibidas.

En los Organismos comerciales los derechos reconocidos por el capítulo 3 "Tasas y otros ingresos" exceden a las previsiones en un 64%. En el capítulo 9 "Pasivos financieros" los derechos reconocidos representan un 64% de las previsiones definitivas, debiéndose esos menores ingresos de los previstos a que el SENPA no tuvo que recurrir a financiación exterior por la cantidad de 14.500 millones de pesetas tal como en principio previó.

Las mismas desviaciones y variaciones, pero desde el punto de vista orgánico se recogen en los anexos II.3.3 y II.3.4.

De dichos anexos se extrae lo siguiente:

(en millones de pesetas)

	OAA	OACIF
- Previsiones definitivas[44]	1.902.718	529.289
- Derechos reconocidos	2.045.131	526.068
Diferencias netas:	(142.413)	3.221
Explicación de las diferencias netas:		
- Exceso de previsiones s/derechos	33.105	37.060
- Exceso de derechos s/previsiones	175.518	33.839
Diferencias netas:	(142.413)	3.221

El exceso de previsiones sobre derechos se produce fundamentalmente en la Gerencia de Infraestructura de la Defensa (8.398 millones de pesetas) en el Fondo de Garantía Salarial (13.070 millones de pesetas) y en el Servicio Nacional de Productos Agrarios (16.130 millones). El exceso de derechos sobre previsiones tiene lugar principalmente en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (11.123 millones de pesetas) y en el Instituto Nacional de Empleo (154.074 millones de pesetas).

La variación interanual en los derechos reconocidos es la siguiente:

DERECHOS RECONOCIDOS
(en millones de pesetas)

	1990	1989	VARIACIÓN (%)
OAA	2.045.131	1.771.877	15,4
OACIF	526.068	538.073	(2,2)

Con respecto a la variación interanual en los ingresos hay que señalar que, en el caso de los Organismos autónomos comerciales si consideramos los ingresos no financieros se produce un aumento de los mismos del 28,5% y el descenso del 2,2% en los ingresos totales es consecuencia de que el Consorcio de Compensación de Seguros no

[44] La LPGE de 1988 dispuso en su D.A. 2ª que los beneficios del Banco de España imputables al Tesoro se ingresarían: a) El primer día hábil del mes de noviembre de cada año el 70% de los generados hasta el 30 de septiembre y b) El primer día hábil del mes de febrero siguiente el 90% de los beneficios imputables correspondientes al año anterior, pendientes de ingreso.

[44] En las previsiones definitivas no está incluido el remanente de tesorería en la OAA ni el resultado de operaciones comerciales y fondo de maniobra en los OACIF.

contabiliza presupuestariamente en 1990 el préstamo recibido del Estado para a su vez concedérselo a CESCE (en 1989, 54.752 millones de pesetas) y que en el FORPPA se reducen los derechos reconocidos en el capítulo 9 (-64.709 millones de pesetas) por créditos recibidos del Banco de España.

Las variaciones positivas más importantes en los ingresos se producen en el INEM (aumento de 186.568 millones de pesetas), IRYDA (25.398 millones de pesetas), ICONA (17.009 millones de pesetas) y Gerencia de Infraestructura de la Defensa (7.875 millones de pesetas) y las negativas en el Consorcio de Compensación de Seguros (-52.063 millones de pesetas) y el Fondo de Garantía Salarial (-7.472 millones de pesetas).

A continuación se comentan, por Organismos, los aspectos más significativos de las desviaciones y variaciones citadas:

- En la Gerencia de Infraestructura de la Defensa el exceso de previsiones sobre derechos reconocidos se produce casi en su totalidad en el capítulo 6 "Enajenación de inversiones reales". Dicho exceso es, según cuentas, de 8.388 millones de pesetas, pero si se corrige de acuerdo con lo indicado en el apartado I.3.1.1.B.2) anterior de este Informe, sería realmente de 18.380 millones. Se produce básicamente porque se prevén unos ingresos por ventas de solares mayores de los realizados.

- En el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) el exceso de derechos sobre previsiones, que asciende a 11.123 millones, se produce principalmente en la aportación del Estado a la Mutualidad.

- En el INEM destaca la desviación de los derechos reconocidos sobre las previsiones en el capítulo 1 y concretamente en el artículo 12 "Cotizaciones sociales". Esta desviación, según las cuentas rendidas, es de 149.193 millones de pesetas, un 18,9% en términos relativos.

El aumento de ingresos en el INEM es de 186.568 millones de pesetas, de los que 171.984 millones de pesetas corresponden al que se produce en cotizaciones sociales debido al incremento de las bases de cotización y del nivel de empleo.

Debe, sin embargo, significarse que estas cifras que se deducen de las cuentas rendidas, pueden diferir de las reales, ya que por el retraso con que la Tesorería General de la Seguridad Social envía los datos sobre recaudación al Organismo, los derechos reconocidos en cuentas responden a una estimación provisional.

- En el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) las previsiones de ingresos exceden a los derechos reconocidos en 10.097 millones de pesetas en el capítulo 1 y de 2.114 millones de pesetas en el capítulo 3. En el caso del capítulo 1 la desviación corresponde a las cuotas empresariales al FOGASA aunque hay que señalar que no se llevaron a ingresos 8.364 millones de pesetas al realizarse la liquidación provisionalmente y no incluirse la recaudación real neta de cuotas, por el retraso de la TGSS en rendir la cuenta definitiva de las cantidades recaudadas[*].

En el capítulo 3 de ingresos se recogen, en este organismo, los reintegros de cantidades abonadas a los trabajadores por cuenta de las empresas. Se previeron 9.513 millones de pesetas y se indica en la liquidación que los derechos reconocidos ascendieron a 7.399 millones de pesetas con lo que la desviación es la citada de 2.114 millones de pesetas. Ahora bien, hay que señalar como se puso de manifiesto con anterioridad, que el organismo ha reconocido derechos en este capítulo por la suma de 4.322 millones de pesetas correspondientes a la amortización de deuda pública adquirida. Estos derechos debieron imputarse al capítulo 8 de ingresos y de haberse hecho así el exceso de previsiones en los reintegros de las cantidades abonadas a los trabajadores por cuenta de las empresas ascendería a 6.435 millones de pesetas. Esta desviación se debe a que no se llegaron a cubrir los objetivos previstos en cuanto a número de convenios de recuperaciones firmados con empresas deudoras del FOGASA lo cual supone falta de eficacia.

- En el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) aumentan los ingresos por transferencias de capital recibidas del Estado, en 29.717 millones de pesetas (incremento relativo del 83%). Este incremento fue necesario para financiar, como se ha indicado en el análisis de la sección 21, los mayores gastos del IRYDA ocasionados por las lluvias torrenciales e inundaciones ocurridas en 1989.

- En el Consorcio de Compensación de Seguros se produce un descenso de los derechos reconocidos, según la liquidación de ingresos, de un 82%. Este descenso se debe al hecho, ya comentado en la ejecución de gastos, de que no se contabilizan presupuestariamente los ingresos recibidos del Estado con el fin de financiar los préstamos a CESCE. Ello supone una reducción de los ingresos del capítulo 9 por la suma de 54.750 millones de pesetas.

- En el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) el exceso en las previsiones de ingresos respecto de los derechos reconocidos corresponde al capítulo 9 al no haber recurrido el Organismo a la financiación mediante préstamos por la suma de 14.500 millones de pesetas tal como se había previsto.

- En el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) los ingresos aumentan, en 1990, en un 96% respecto del ejercicio anterior (incremento absoluto 17.009 millones de pesetas). Este aumento de ingresos se debe a los préstamos recibidos del Banco Europeo de Inversiones (10.993 millones de pesetas) y Banco de Crédito Agrícola (1.500 millones de pesetas) y a las mayores transferencias corrientes y de capital recibidas del Estado (aumento de las mismas en 4.739 millones de pesetas). El incremento de ingresos por endeudamiento se justifica por la renovación de la flota de aviones contra incendios forestales.

II.4.- PRESUPUESTO FUNCIONAL.

La clasificación funcional del gasto público tiene la finalidad de poner de manifiesto los objetivos de dicho gasto.

Con esta clasificación se trata de conocer, además de quién gasta y cómo, para qué se gasta.

Con dicha finalidad, los Presupuestos Generales del Estado para 1990 distribuyen el gasto total en 9 grupos funcionales, 31 funciones, 82 subfunciones y 247 programas.

En este apartado del Informe anual se trata de determinar si es posible evaluar en qué medida se han conseguido los objetivos a los que sirven los gastos (control de eficacia) y si dichos objetivos se han conseguido con el mínimo coste o procurando el máximo beneficio (control de economía y eficiencia).

En la Ley General Presupuestaria, art. 134, se señala que a la Cuenta de la Administración General del Estado se unirá una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

Con respecto a estas dos Memorias, este Tribunal tiene que señalar que no se reciben con la Cuenta de la Administración General del Estado, por lo que no puede emitir opinión alguna sobre lo que, según la Ley es objeto de las mismas y constituiría un elemento muy valioso para enjuiciar la eficacia y economía en el uso de los recursos públicos.

En las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989 y 1990 se establece un sistema de seguimiento de objetivos aplicable concretamente a 13 programas.

Este sistema de seguimiento de programas se reguló por Orden de 11 de abril de 1989 del Ministerio de Economía y Hacienda y Resolución de la Dirección General de Presupuestos de 29 de junio de 1989. Destacamos, de la citada Orden los puntos 4.1, según el cual los órganos gestores han de realizar un informe anual con el resultado de su gestión, y 5.3 en el que se señala que los Interventores delegados elaborarán un informe en el que se emita opinión sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y su adecuación a la realidad de los programas.

El Tribunal de Cuentas solicitó sendos informes, referidos al ejercicio 1990, con el fin de comprobar los resultados del seguimiento de objetivos aplicado a los 13 programas escogidos en las Leyes de Presupuestos de 1989 y 1990 que son:

142 A: Tribunales de Justicia
222 B: Seguridad Vial
422 B: Educación General Básica
422 C: Enseñanzas Medias
512 A: Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos.
513 A: Infraestructura de Transporte Ferroviario.
513 D: Creación de Infraestructura de Carreteras.
515 A: Infraestructura de Aeropuertos.
515 B: Explotación del Sistema de Circulación Aérea.
531 A: Mejora de la Infraestructura Agraria.
541 A: Investigación Científica.
542 A: Investigación Técnica.
542 E: Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Los créditos iniciales totales de estos programas ascendían a 1.518.938 millones de pesetas. El seguimiento de objetivos en estos programas supone un seguimiento del 10,7% del gasto consolidado del Estado y los Organismos autónomos de él dependientes. De la información recibida se extraen las siguientes conclusiones sobre el seguimiento que se ha realizado:

- Sólo en el caso de 3 programas se ha remitido el Informe a realizar por los órganos gestores, según se dispone en el punto 4.1 de la Orden de 11 de abril de 1989. Esos programas son el 222 B "Seguridad Vial", 422 B "Educación General Básica" y 422 C "Enseñanzas medias".

De estos informes difícilmente se pueden extraer conclusiones. En el caso del programa 222 B sólo se incorporan, por la Dirección General de Tráfico, unos estados informativos relativos a inversiones. En el programa 422 B se evalúa nada más un subobjetivo comprendido en uno de los 7 objetivos del programa cual es el de "Escolarización en centros públicos del porcentaje correspondiente de la población de 6 a 13 años". Y por último, en el programa 422 C se evalúan exclusivamente unos subobjetivos, incluidos en el primer objetivo, relativos a la escolarización en Centros de Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas de Idiomas.*

- Las Intervenciones Delegadas en los Ministerios correspondientes han elaborado Informes de Control financiero de todos los programas indicados. Las conclusiones difieren según los casos, desde aquellos programas en los que no se realiza seguimiento alguno de consecución de objetivos hasta aquellos en que se ha iniciado en alguna medida, aunque resulte insuficiente, un control de las realizaciones (que son las que justifican el gasto).

A continuación se destacan las conclusiones más importantes, extraídas de estos Informes, para algunos de los programas que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 se citan como objeto de especial aplicación del seguimiento de objetivos:

[*] Ver punto E) de la Introducción al apartado I.3 de este Informe.

142 A Tribunales de Justicia.

Se destaca la dificultad de comprobar el cumplimiento de objetivos debido al carácter genérico de los indicadores relativos a la adaptación de la estructura judicial a lo establecido en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

222 B Seguridad Vial.

Existe una desconexion entre los indicadores y los objetivos que impide determinar el grado de cumplimiento de estos. Además al ser dos los gestores del programa (Dirección General de la Guardia Civil y Jefatura de Tráfico) se hace difícil el aislamiento de los objetivos y la evaluación de resultados.

422 B Educación General Básica.

Como se ha dicho anteriormente, los gestores sólo han hecho seguimiento de un subobjetivo. Por otro lado, la Dirección General de Presupuestos estableció, en 1990, una estructura de objetivos diferente a la diseñada en la Memoria que acompañaba a la Ley de Presupuestos, razón que dificultó el seguimiento de los mismos.

512 A Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos.

Gestionan el programa la Dirección General de Obras Hidráulicas (Ministerio de Obras Públicas) y las Confederaciones Hidrográficas.

No se puede realizar un adecuado seguimiento del programa debido a que los gestores no habían elaborado los estados e informes previstos en la normativa.

Si no se mejora el tratamiento de la información contable desde el punto de vista de las relaciones Dirección General de Obras Hidráulicas-Confederaciones Hidrográficas no se podrá verificar el cumplimiento de los objetivos, sobre todo en materia de inversiones.

513 A Infraestructura del Transporte Ferroviario.

Programa que se inserta en el marco de planificación estratégica definido en el Plan de Transporte Ferroviario aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de abril de 1987.

Gestionan el programa la Dirección General de Infraestructura del Transporte (Ministerio de Transportes), RENFE y FEVE. Los gestores tienen establecido un sistema de seguimiento de las obras (inversiones) pero no va dirigido al seguimiento de los objetivos del programa. Por otro lado, aunque los objetivos son claros y concretos, los indicadores económicos no siempre permiten conocer si se han realizado aquellos.

513 D Creación de Infraestructura de Carreteras.

El seguimiento del cumplimiento de los objetivos fracasa por la falta de información del órgano gestor (Dirección General de Carreteras) que si bien realiza, como es natural, un seguimiento de la obra principal no ocurre así respecto de las obras accesorias.

Se señala, además, en el Informe de la Intervención delegada que al no indicarse a que objetivos afectan las modificaciones presupuestarias no se puede realizar un seguimiento de los mismos.

542 E Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Es un programa complejo, dividido en 8 subprogramas y gestionado por distintos órganos (diversas Direcciones Generales del Ministerio de Industria, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y el Instituto Tecnológico Geominero de España).

Para el conjunto del programa y para el ejercicio 1990 no se ha puesto en marcha el sistema de seguimiento de programas y los centros gestores no han elaborado estados informativos por lo que no se puede evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos. Hay que señalar, de todas formas, que en el caso de los 2 organismos autónomos (CIEMAT e ITGE) se realiza algún seguimiento mientras que en la Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Industria no se ha iniciado nada.

Lo expuesto en el párrafo anterior es consecuencia de la manifestación del Director General de Presupuestos a requerimiento de este Tribunal, en el sentido de no contar con los referidos informes por no haber sido enviados por los Departamentos gestores del programa. Se alega que el IGTE remitió a la Superioridad el informe de seguimiento de objetivos de acuerdo con una Orden ministerial que no era de aplicación al presupuesto de 1990, no teniéndose constancia de este hecho ni en el Tribunal ni en la Dirección General de Presupuestos, centro destinatario de los mismos según la normativa en vigor a dicha fecha.

En otros programas como el 515 A, 515 B, 531 A, 541 A y 542 A los centros encargados de su gestión no han elaborado los estados informativos indicados en la Orden de 11 de abril de 1989 por la que se regula el sistema de seguimiento de programas. Por lo tanto no se puede emitir opinión sobre el cumplimiento de objetivos.

Como conclusión de este apartado el Tribunal manifiesta que a pesar del avance que supone la presupuestación por programas por permitir conocer la finalidad del gasto, no se dispone en la actualidad de los medios que permitan llevar a cabo un seguimiento de dichos programas. No se puede, por tanto, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas en donde, en relación con la función fiscalizadora, se señala "El Tribunal de Cuentas ejercerá su función en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos".

II.5.- ANÁLISIS ESPECIAL DEL REFLEJO PRESUPUESTARIO DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ESPAÑA-COMUNIDADES EUROPEAS.

En el anexo II.5.1 se reseña el flujo de fondos entre la CEE y el Estado español, a lo largo del año 1990.

Por imperativos del procedimiento establecido por la CEE para la puesta a disposición de determinadas aportaciones y retornos, así como por el sistema de aplicación presupuestaria de ingresos y gastos seguido por el Estado español, se producen inevitables desplazamientos contables entre los distintos ejercicios, que afectan al fiel reflejo de las operaciones anuales y al saldo resultante de las mismas. Esta circunstancia pretende salvarse en el presente informe a través de la periodificación de los conceptos que resultan susceptibles de tal operación y de las explicaciones que siguen.

Por lo que se refiere explícitamente al ejercicio presupuestario de 1990 han de destacarse dos novedades:

a) En el ámbito externo, la aprobación del presupuesto rectificativo y suplementario nº 2 de la CEE para el ejercicio de 1990 supuso la anulación de la aportación española (entre otras) a la CEE por el concepto "Recurso PNB".

b) Internamente, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1990, en aplicación de la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria, introdujo cambios en la articulación presupuestaria de los fondos procedentes de la CEE, en el sentido de canalizar extrapresupuestariamente aquéllos que tengan un destinatario distinto del propio Estado (por ejemplo, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, INEM, Universidades, etc.).

Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza a continuación la liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente al ejercicio 1990, en la parte que registra los recursos procedentes de la CEE y las aportaciones españolas a la misma, cuyo detalle se recoge en el anexo II.5.2.

II.5.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.

A) FEOGA-GARANTÍA.

La gestión de los fondos del FEOGA-GARANTÍA se instrumenta a través de anticipos del Tesoro al FORPPA que, posteriormente, son reintegrados por la CEE en un plazo de dos meses. La primera columna del anexo II.5.1 refleja los reintegros recibidos en 1990, en tanto que las cifras aplicadas al presupuesto (anexo II.5.2) recogen los derechos reconocidos por el FORPPA por el gasto realizado en el ejercicio. La diferencia, pues, obedece a la demora inherente al sistema de tramitación de los reintegros y se concreta en el importe de los meses de noviembre y diciembre de cada año.

En el ejercicio de 1990 el FORPPA ha reconocido derechos en este concepto por importe de 301.501 millones de pesetas, lo que supone un 28% de incremento respecto al ejercicio anterior.

B) Premio de cobranza.

Se corresponde con el 10% de las aportaciones del Estado español a la CEE por el concepto de recursos propios tradicionales, (RPT). La liquidación e imputación al presupuesto, tanto de este último concepto como del correlativo premio de cobranza, se efectúan simultáneamente con un desplazamiento habitual de 2 meses causado por el sistema de tramitación establecido por la CEE.

En el ejercicio 1990 se ha imputado al presupuesto de ingresos del Estado por este concepto la cantidad de 8.433 millones de pesetas, que se corresponde con la aportación por RPT de noviembre/1989 a septiembre/1990 (11 meses), habiéndose aplazado a 1991 la imputación presupuestaria del importe correspondiente al mes de octubre/1990 (669 millones de pesetas), sin causa que lo justifique, ya que la aportación por RPT de dicho mes sí se ha aplicado al presupuesto de 1990.

C) Intereses por anticipos de FEOGA-GARANTÍA.

Generados como compensación por el gasto financiero de los anticipos reseñados en el apartado a) anterior, en 1990 se contabilizaron 3.633 millones de pesetas, (400 menos que en 1989, 10%), si bien hay que tener en cuenta que en 1989 se contabilizaron 1.775 millones de pesetas correspondientes al ejercicio 1988.

D) Reembolsos.

Este epígrafe recoge la compensación al Estado español por su participación en la financiación de los gastos de liquidación, almacenamiento y depreciación de antiguos excedentes agrícolas (art. 188 del Acta de Adhesión y Reglamento 2051/1988).

En el ejercicio 1990 se han recibido 6.774 millones de pesetas, 659 más que en 1989 (tasa de incremento 11%).

E) FEOGA-ORIENTACIÓN

El importe de los fondos recibidos de la CEE por este concepto en 1990 alcanza la cifra de 16.666 millones de pesetas, lo que significa un grado de ejecución del 44% y una variación interanual negativa de 9.694 millones de pesetas (37%).

F) FEDER Y FSE.

Por la suma de estos conceptos se ha recibido en 1990 la cifra de 194.524 millones de pesetas, de los cuales se han devuelto a la CEE 3.260 millones de pesetas por fondos de ejercicios anteriores no dispuestos.

Se han aplicado a presupuesto 78.398 millones de pesetas, con una variación interanual negativa de 101.587 millones de pesetas (56%), si bien ha de considerarse el hecho de que, por vía extrapresupuestaria, se han canalizado 112.866 millones de pesetas a otros agentes distintos del Estado (de los cuales 15.890 millones de pesetas permanecen como saldo al 31.12.1990 en la cuenta del Tesoro).

G) Otras transferencias CEE.

La cantidad aplicada al presupuesto de ingresos del Estado de 1990 es de 3.695 millones de pesetas, (2.062 menos que en 1989, 36%), si bien hay que sumar otros 586 millones de pesetas canalizados extrapresupuestariamente, de los que 129 millones de pesetas permanecen como saldo al 31.12.90 en el Tesoro.

H) Retorno CECA.

En concepto de retorno de la CECA por costes salariales y ayudas sociales por reconversión, se ha recibido en 1990 la cantidad de 961 millones de pesetas (en 1989 no se percibió importe alguno), de los cuales se han aplicado a presupuesto 353 millones de pesetas y el resto se han hecho llegar, por vía extrapresupuestaria, a los interesados (excepto 4 millones de pesetas que permanecen como saldo en el Tesoro al 31.12.1990).

I) Reintegros.

En el concepto 380 " Reintegros de ejercicios cerrados" se han contabilizado 11 millones de pesetas por reajuste de la aportación IVA de 1987.

En el 381 "Reintegros del ejercicio corriente" figuran 2.658 millones de pesetas, correspondientes a la aportación española de enero a mayo/1990 por el Recurso PNB, posteriormente anulada por la CEE a través del presupuesto rectificativo y suplementario nº 2 , y devuelta al Estado español.

II.5.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS.

A) Recurso IVA.

El importe de las aportaciones españolas a la CEE durante 1990, por este concepto (1ª columna del anexo II.5.1) se corresponden con los anticipos brutos por el periodo enero-diciembre, menos los retornos fijados en el Acta de Adhesión según una escala de porcentajes decrecientes (40% en 1989, 25% en 1990). Dado que los retornos se reciben al mes siguiente de la aportación realizada, y que la aplicación al presupuesto se efectúa por el neto, existe normalmente un desplazamiento de tales imputaciones presupuestarias de un mes, por lo que a cada ejercicio se imputa el periodo diciembre a noviembre. En el ejercicio 1989, sin embargo, la imputación al presupuesto se efectuó por el periodo diciembre/88 a octubre/89 (11 meses) y en el de 1990 por el periodo noviembre/89 a septiembre/90 (también 11 meses), por lo que permanece aplazada injustificadamente la imputación de los meses de octubre/90 y noviembre/90, por un importe total de 40.686 millones de pesetas, neto, cuyos retornos se recibieron con suficiente antelación respecto del cierre del ejercicio.

Asimismo se ha aplazado sin causa justificada la imputación presupuestaria de la liquidación neta correspondiente a 1989 (31.476 millones de pesetas) aportada a la CEE también con bastante anterioridad al cierre del ejercicio.

En relación con los aplazamientos anteriormente reseñados, ha de mencionarse el hecho de que, al cierre del ejercicio, el crédito disponible en esta partida presupuestaria (33.823 millones de pesetas) resultaba insuficiente para la imputación de las cantidades mencionadas.

Por otra parte, de la cantidad aplicada al presupuesto de 1990 (224.177 millones de pesetas), 12.768 millones de pesetas se corresponden con la liquidación de 1988 y 640 millones de pesetas con ajustes de 1986 y 1987.

El grado de ejecución de este concepto, pese a la no contabilización de los importes reseñados, ha alcanzado el 87%, con un incremento respecto del ejercicio anterior de 71.591 millones de pesetas (47%).

B) Recurso PNB.

Como consecuencia del Presupuesto Rectificativo y Suplementario nº 2 de la CEE (D.O. de 3.9.90), la aportación española a la CEE por el recurso PNB correspondiente al ejercicio 1990 fue fijada en 0 pesetas, devolviéndose por la CEE las aportaciones realizadas por los meses de enero a mayo (2.658 millones de pesetas). Tal devolución fue imputada al concepto 381 "Reintegros del ejercicio corriente", del presupuesto de ingresos del Estado.

La cantidad aplicada al presupuesto de gastos por el concepto de Recurso PNB durante 1990 (6.701 millones de pesetas) se corresponde con la aportación neta de noviembre/89 a mayo/90, además del saldo correspondiente al ejercicio 1988 (1.398 millones de pesetas).

Ha sido aplazada la imputación al presupuesto de otras cantidades correspondientes al saldo 1988 (334 millones de pesetas) y al saldo 1989 (2.198 millones de pesetas), observandose igualmente insuficiencia de crédito en la liquidación del presupuesto para la imputación de estas obligaciones.

La comparación interanual en este concepto arroja una disminución de las obligaciones reconocidas de 32.132 millones de pesetas (83%).

C) Recursos propios tradicionales.

Por este apartado, que comprende los derechos de aduanas, exacciones agrícolas y cotización a la producción de azúcar e isoglucosa, se han imputado al presupuesto 91.016 millones de pesetas, correspondientes al periodo noviembre/89 a octubre/90, desplazamiento normal en este concepto en virtud del sistema de liquidación establecido por la CEE.

El grado de ejecución ha alcanzado el 84%, con una variación negativa de 1.415 millones de pesetas respecto del ejercicio anterior (2%).

D) Aportación al FED.

Por este concepto se han reconocido obligaciones por importe de 10.757 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 98% y una variación interanual de 3.045 millones de pesetas (39%).

II.5.3.- SALDO DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ESPAÑA-CEE.

a) Atendiendo en exclusiva al flujo financiero producido (columna 1 del anexo II.5.1), con independencia del ejercicio al que correspondan las operaciones y de su aplicación al Presupuesto del Estado, se obtiene un volumen de entradas de 502.399 millones de pesetas frente a unas salidas de 383.738 millones de pesetas, lo que arroja un saldo de 118.661 millones de pesetas favorable al Estado español. Ello supone 65.282 millones de pesetas menos que en 1989 (35%).

b) Si se periodifican los conceptos susceptibles de tal operación, se obtienen unos ingresos de 534.768 millones de pesetas imputables a 1990 y unos gastos de 353.543 millones de pesetas, obteniéndose por tanto un saldo positivo de 181.225 millones de pesetas, 22.881 millones de pesetas más que en el ejercicio 1989 (14%).

c) Respecto a la liquidación del Presupuesto del Estado, los derechos reconocidos en los conceptos considerados en este epígrafe ascienden a 422.122 millones de pesetas que, enfrentados a los 332.654 millones de pesetas de obligaciones reconocidas, originan un superávit de 89.468 millones de pesetas, inferior en 104.224 millones de pesetas al del ejercicio 1989 (54%). Considerando la influencia de la Orden de 1 de febrero de 1990 (que establece la gestión extrapresupuestaria de ciertos fondos provenientes de la CEE, destinados a otros agentes distintos del propio Estado) así como las cantidades cuya imputación al presupuesto se ha aplazado injustificadamente, el superávit sería de 129.503 millones de pesetas, asimismo inferior al de 1989, pero en la cifra de 64.189 millones de pesetas (33%).

III.- FISCALIZACIONES ESPECIFICAS

III.1.- FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

El Instituto Nacional de Estadística (en lo sucesivo INE), es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, cuya naturaleza le fue otorgada por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Con anterioridad tenía naturaleza de Dirección General del Ministerio de Economía y Hacienda.

Esta transformación supuso la asunción por el INE de competencias que anteriormente eran ejercidas por los Servicios Centrales del Ministerio. El ejercicio "ex novo" de dichas competencias, fundamentalmente de gestión económico-financiera y de personal, explica algunas de las deficiencias de control y coordinación expuestas en el presente informe de fiscalización. Al propio tiempo, el hecho de que la estructura y las dotaciones de los presupuestos del Organismo de 1990 y 1991 no se hubiesen adaptado a la nueva naturaleza del mismo, provocó dificultades en su gestión.

Los objetivos de la fiscalización practicada han sido: a) analizar el sistema contable implantado en el Organismo y sus resultados, tal como aparecen plasmados en la Cuenta rendida, así como la fiabilidad de sus principales agrupaciones; b) comprobar la regularidad de la gestión económico-financiera del Organismo y c) analizar la adecuación de los objetivos e indicadores establecidos en el programa presupuestario 551.C "Elaboración y difusión estadística" gestionado íntegramente por el INE, así como el sistema de seguimiento implantado al respecto.

El período objeto de fiscalización es básicamente el ejercicio 1990, si bien se ha efectuado un seguimiento de las principales deficiencias en ejercicios siguientes y hasta el momento de finalización de los trabajos de campo (mayo/1992) a fin de comprobar su persistencia o subsanación.

No se han presentado limitaciones esenciales al trabajo de fiscalización que hayan impedido la obtención de conclusiones relevantes sobre los objetivos establecidos, si bien en algunos casos ha sido necesaria la realización de procedimientos

alternativos a los inicialmente programados debido a las deficiencias u omisiones encontradas en los registros o archivos correspondientes.

III.1.1.- REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD

Sistema contable

En general, el sistema contable establecido en el INE resulta satisfactorio, dado que funciona mediante la aplicación S.I.C.A.I. además de algunos registros auxiliares propios. El sistema está totalmente centralizado.

No obstante, debe señalarse la existencia de notables debilidades de control interno contable en las áreas de INGRESOS, INMOVILIZADO, EXISTENCIAS Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS que afectan a la fiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta rendida a este Tribunal, como más adelante se expone.

Examen de la Cuenta rendida

Como consecuencia de los defectos encontrados en las áreas anteriormente mencionadas, se puede afirmar que la Cuenta rendida por el INE a este Tribunal no refleja la imagen fiel de la situación patrimonial del Organismo.

A continuación se analizan las agrupaciones de Balance que avalan más significativamente dicha opinión. A estas observaciones han de sumarse las que se derivan del examen de los epígrafes restantes del presente informe (principalmente Ingresos y Tesorería).

A.- Inmovilizado

El Balance del Instituto al 31-12-1990 (primero desde su conversión en Organismo autónomo) recoge las siguientes cifras de inmovilizado, en millones de pesetas:

	31-12-90	1-1-90	DIFERENCIA
Inmovilizado material	21.846	21.234	612
(Amort. Acumul. Inmov. mat.)	(2.721)	(1.679)	(1.042)
Inmovilizado inmaterial	10.017	4.057	5.960
(Amort. Acumul. Inmov. inmat.)	(2.023)	(689)	(1.334)

De las pruebas practicadas por el equipo de fiscalización respecto de dichas cifras se han obtenido las siguientes evidencias:

1º) El INE carecía al 31-12-1990 de inventario de sus bienes muebles e inmuebles. Con fecha 7 de noviembre de 1991 se completó, mediante contratación externa, un inventario de los bienes muebles sitos en los Servicios Centrales, a través de una aplicación informática y sistema de etiquetado que se consideran satisfactorios, si bien sus resultados aún no han sido reflejados en contabilidad. No se ha iniciado, en cambio, el inventario de los bienes muebles de las Delegaciones y el de todos los bienes inmuebles.

2º) Como consecuencia de lo anterior, las cifras consignadas como inmovilizado material en el Balance inicial del Organismo al 1-1-1990 no se encuentran suficientemente soportadas. Su importe se obtuvo de un Balance de Sumas y Saldos, al 31-12-1989, de la etapa anterior como Dirección General, sin desglose ni documentación justificativa.

3º) Los incrementos del inmovilizado en 1990 se corresponden con las obligaciones reconocidas en las partidas 630 "Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los Servicios" y 640 "Gastos en inversiones de carácter inmaterial". Cabe señalar, respecto de esta última, que el sistema contable establecido en el Plan adaptado al INE no ha sido cumplido por éste en cuanto que no se ha aprovechado el desglose de cuentas por cada proyecto de inversión. Ello ha supuesto que un porcentaje del 10% de los gastos activados como inmovilizado inmaterial no hayan podido ser clasificados en proyectos concretos. La mayor parte de los gastos imputados a este concepto (alrededor del 90%) se corresponde con nóminas de personal contratado. Respecto del resto, ha sido detectada la incorrecta imputación presupuestaria a la partida 640 de gastos correspondientes a obras de acondicionamiento de la cafetería de los Servicios Centrales del INE, así como la adquisición de mobiliario y de maquinaria y la compra de bolígrafos para atenciones representativas (ver apartado III.1.4.). Sobre una muestra de obligaciones reconocidas en dicho concepto no referidas a nóminas de personal contratado (muestra que supone el 80% de las mismas y alcanza un importe de 475 millones de pesetas), los gastos incorrectamente imputados ascendían a 162 millones de pesetas. De estos últimos, 118 millones debieron haberse aplicado al concepto 630 y los 44 restantes al capítulo 2.

Por otra parte, y dado que la realización de los trabajos activables se efectuó en gran medida con personal de plantilla y recursos materiales propios, resulta inadecuada la no incorporación de su importe al inmovilizado, máxime cuando el INE dispone de aceptables estudios de costes de algunos trabajos desde el año 1989 y anteriores.

No se ha contabilizado baja alguna en inmovilizado, ni siquiera una venta de maquinaria que se ha detectado en la revisión del área de ingresos.

B.- Existencias

El INE dispone de un catálogo de más de 2.000 títulos de publicaciones para su venta.

En el registro y control de este importante volumen de existencias de publicaciones del Organismo, resulta destacable la total ausencia de procedimientos considerados básicos, tales como inventario, recuentos periódicos, control y numeración de albaranes, etc., lo que constituye una deficiencia a subsanar urgentemente. Dicha circunstancia dificulta también la implantación de un control adecuado sobre las ventas, así como una correcta gestión de almacenes.

No ha podido realizarse por el Organismo la estimación aproximada del valor de las existencias que había solicitado este Tribunal.

Por otra parte, el Balance del INE no refleja cantidad alguna en concepto de existencias de publicaciones, al no haberse desarrollado (a juicio del Tribunal incorrectamente) el Grupo III "Existencias" en el Plan de Contabilidad adaptado a dicho Organismo.

C.- Acreedores extrapresupuestarios

Lo resultados más destacables obtenidos en la fiscalización de esta área se pueden agrupar como sigue:

1º) Se produjo en 1990 un importante retraso del ingreso en el Tesoro de las retenciones practicadas al personal por I.R.P.F. Dicho ingreso, por importe de 895 millones de pesetas, no se efectuó hasta septiembre de 1991. Al momento de finalizar la fiscalización "in situ" (mayo de 1992) las retenciones correspondientes a 1991 no se habían ingresado todavía.

2º) El retraso es aún mayor en el caso de otras retenciones correspondientes a 1990, como Derechos pasivos (93 millones de pts.), MUFACE (29 millones de pts.) y otras de menor importancia, ninguna de las cuales se había pagado hasta mayo de 1992.

3º) Numerosas retenciones sobre el importe líquido de la nómina se gestionan extracontablemente (retenciones judiciales, diversas Mutualidades y otras). Durante el año 1990, el importe de estas retenciones se acercó a la cifra de 5 millones de pesetas, cuya gestión y control se efectúa directa y únicamente por el Habilitado, a través de la cuenta de nóminas. Todas estas retenciones deben ser gestionadas a través de cuentas extrapresupuestarias conforme al procedimiento legalmente establecido, sin que este Tribunal pueda aceptar la tesis mantenida en las alegaciones respecto a la negación de su naturaleza de retenciones o a la procedencia de su gestión extracontable.*

Al propio tiempo, se gestiona también por el Habilitado a través de la cuenta de nóminas la recaudación de cuotas por cuenta de una entidad privada denominada "Asociación Benéfica INE", así como el reintegro de los préstamos concedidos por dicha Asociación al personal del Organismo. Esta gestión alcanzó en conjunto un volumen de 48 millones de pesetas en 1990, careciendo la misma de justificación legal o reglamentaria, pese a lo expuesto en las alegaciones.*

4º) En cuanto a la Seguridad Social, la cuenta extrapresupuestaria recoge las retenciones por cuota obrera, por importe de 218 millones de pesetas. En 1990 de esta cifra se han pagado a la Seguridad Social 94 millones, correspondientes a la liquidación del personal laboral del 1º semestre. El 2º semestre y la liquidación de funcionarios de todo el año 1990 no se pagó hasta mediados del año 1991.

Al 31-12-1990 la deuda del INE con la Seguridad Social por dicho año y por todos los conceptos (laborales de plantilla, contratados para inversiones y funcionarios) alcanzaba la cifra de 698 millones de pesetas, de las cuales 585 millones correspondían a cuota patronal y 124 millones a cuota obrera. A dicha cantidad hay que sumar la deuda anterior a 1990 (665 millones correspondientes al personal de plantilla más 513 millones por el personal contratado para la realización del Censo Agrario), lo que hace un total no contabilizado de 1.876 millones de pesetas. Se ha comprobado documentalmente que el INE ha realizado reiteradas actuaciones para obtener la cobertura presupuestaria que necesita para poder satisfacer esta deuda, sin que dichas gestiones hayan fructificado hasta el momento en resultados positivos.

A pesar de lo anterior, es de destacar el hecho de que al 31-12-90 se anuló un crédito en el concepto 160 del Presupuesto por importe de 289 millones de pesetas que, junto con la parte proporcional correspondiente de los 124 millones de pesetas de saldo de la cuenta extrapresupuestaria que recoge las cuotas obreras retenidas deberían haberse utilizado para minorar la deuda citada.

En el momento de finalizar los trabajos de campo, la suma adeudada a la Seguridad Social superaba ya los 2.000 millones de pesetas.

5º) La cuenta 510-9 "Otros acreedores no presupuestarios" recoge reintegros de anticipos a personal, si bien por pequeña cuantía (70.586 pts.) y, en cambio, no recoge ninguna de las retenciones para las que está abierta la cuenta. Dichas retenciones, tal como se expone en el punto 3º anterior, son gestionadas por el Habilitado al margen de la contabilidad del Organismo.

III.1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

La liquidación del Presupuesto de Ingresos del Organismo para 1990 arroja las siguientes cifras (en miles de pesetas):

CONCEPTO	PREV. DEFINITIVAS	Dº RECONOCIDOS	COBROS	PENDIENTE. DE COBRO
300 - VENTA DE PUBLICAC. PROPIAS	32.000	28.025	28.025	------
399 - OTROS INGRESOS	160.653	238.753	238.753	------
400 - TRANSF. CORRIENTES	8.210.764	8.210.764	6.085.903	2.124.861
700 - TRANSF. CAPITAL	8.284.238	8.284.238	6.502.047	1.782.191
TOTAL	16.687.655	16.761.780	12.854.728	3.907.052

Respecto de los conceptos 400 y 700 es de destacar únicamente el notable retraso en el cobro de las cantidades presupuestadas, lo que genera problemas importantes de tesorería al Organismo. En el cuadro que antecede se deduce que el saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre de 1990 alcanza un porcentaje del 23% de los derechos reconocidos. De dicho importe, al 31 de diciembre de 1991 aún se encontraba pendiente de cobro la cantidad de 1.460 millones de pesetas, relativa a derechos reconocidos por transferencias a recibir del Ministerio de Economía y Hacienda, cuyos correspondientes créditos de gasto fueron anulados en la liquidación del Presupuesto del Ministerio de 1990 (ver aptdo. II.1.2 de este Informe Anual). El INE debe proceder, en consecuencia, a la correlativa anulación de los citados derechos reconocidos.

El concepto 300 "Venta de publicaciones propias", pese a su reducida importancia cuantitativa, tiene sin embargo interés especial debido a las graves debilidades de control interno encontradas en la revisión practicada. Destacan entre ellas la inseguridad de la custodia de los fondos, la falta de arqueos y de registros contables, la inexistencia de procedimientos normalizados e instrucciones de gestión, los defectos de coordinación entre las distintas Unidades responsables, el desconocimiento por el Servicio de contabilidad de los datos de facturación, cobro y gestión de deudas, la omisión de la liquidación a Hacienda del IVA recaudado, y la no realización de control alguno sobre las existencias.

Junto a la venta de publicaciones, en dicho concepto se han acumulado incorrectamente otros ingresos, de variada naturaleza, que son gestionados tanto a través de las dos Cajas de efectivo de los Servicios Centrales como de las Delegaciones provinciales. Entre ellos, cabe señalar los correspondientes a servicio de información estadística, certificados, teléfono público, venta de maquinaria, fotocopias y trabajos para el exterior. Se incumple, por tanto, el principio de especialidad en la imputación de estos ingresos.

Los fondos recaudados por este concepto son entregados periódicamente al Habilitado del Organismo por los encargados de las Cajas de efectivo. El Habilitado los ingresa en una cuenta restringida de recaudación para, al final del ejercicio, transferirlos a la cuenta abierta en el Banco de España y ser reflejados en ese momento en Contabilidad. A partir de julio de 1990 el ingreso periódico de la recaudación por el Habilitado se efectúa en la cuenta de nóminas. El sistema señalado provoca el incumplimiento del régimen establecido para el funcionamiento tanto de las cuentas restringidas (cuyo saldo debe ser transferido cada 15 días a la cuenta del Organismo) como de la cuenta de nóminas, que no puede ser utilizada para los ingresos citados.

Los arqueos efectuados por este Tribunal a las cajas de efectivo han puesto de manifiesto diferencias, tanto en exceso como en defecto, que, aún cuando no resultan relevantes en valor absoluto, evidencian la falta de control existente. Los movimientos de fondos de dichas Cajas no tienen reflejo contable y su saldo al final de ejercicio no consta en el Balance (ver apartado III.1.6).

Respecto de las publicaciones editadas por el INE correspondientes a obras de autor, se ha detectado el incumplimiento del principio de presupuesto bruto debido a que se han abonado 162.865 pesetas en concepto de "derechos de autor" atípicos, detrayéndolas directamente del importe de las ventas.

El concepto 399 "Otros ingresos" recoge los ingresos procedentes del Ministerio del Interior, en compensación de los trabajos excepcionales realizados por el INE en diversos procesos electorales. Su contabilización responde al principio de caja, habiéndose omitido por tanto en los registros de contabilidad el importe de los derechos pendientes de cobro, cuyo reconocimiento procede en el momento de reclamar el pago al Ministerio del Interior, frente a lo expuesto en las alegaciones.*

Se han detectado asimismo ingresos no contabilizados, correspondientes a abonos realizados por la Agencia EUROSTAT por contratos suscritos con el INE. A lo largo del período 1989 a 1991 se han percibido por este concepto 470.822.404 pesetas (200.794.810 pesetas en 1990), a las cuales se ha dado el siguiente destino:

- 226.902.352 pesetas han sido transferidas al Tesoro, por lo que han tenido entrada en la Contabilidad del Estado (125.673.016 pesetas de 1990).

- 20.151.879 pesetas (correspondientes a 1990) han sido utilizadas para anticipar pagos no contabilizados (retribuciones por importe de 16.651.879 pesetas y gastos menores por caja por valor de 3.500.000 pesetas.). El importe de las retribuciones ha sido regularizado con cargo a los presupuestos de 1991 y 1992 (ver apartados III.1.5 y III.1.6).

- 223.768.173 pesetas figuran como saldo en cuentas bancarias al 31-12-1991, sin reflejo en la contabilidad del Organismo (54.969.915 pesetas al 31-12-1990).

Los derechos pendientes de cobro al 31-12-1991, según se desprende de los contratos firmados, ascendían a 1.776.283 ECU, que se encontraban también sin contabilizar (929.076 ECU al 31-12-1990).

Este Tribunal no puede aceptar la tesis sostenida en las alegaciones respecto a la naturaleza de estos ingresos que, en opinión de este Tribunal, se corresponden con derechos presupuestarios del INE por prestación de servicios, concepto bajo el cual deben ser tramitados y contabilizados. En efecto, el INE, en su propio nombre y responsabilidad, se ha comprometido, a través de los convenios firmados con la Agencia EUROSTAT, a la realización de un cierto número de trabajos, con independencia de que los mismos se efectúen con medios propios en actividad ordinaria o extraordinaria o a través de la contratación de medios ajenos. En todo caso, el INE es siempre el responsable de dichos trabajos y el titular de los derechos y obligaciones derivadas de los convenios, no un simple intermediario como parecen sugerir las alegaciones.*

En función de todo ello, este Tribunal considera que el INE debe proceder de manera urgente a la imputación a su Presupuesto de todos los ingresos producidos no transferidos al Tesoro y, para el futuro, adopte las medidas necesarias para evitar la pervivencia de dichas anomalías[1].

III.1.3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

Elaboración

La elaboración del Presupuesto del INE para 1990 se corresponde con el sistema tradicional de presupuesto administrativo, toda vez que la documentación soporte del mismo no contempla los instrumentos básicos de planificación y seguimiento imprescindibles en un presupuesto por programas.

Los objetivos e indicadores reflejados en la Memoria del Presupuesto no son representativos de la actividad del Organismo ni resultan adecuados para examinar los resultados de dicha actividad, careciendo por tanto de validez a efectos de su fiscalización particularizada por este Tribunal. En cambio, el INE dispone de un detallado Plan de Actuación en el que se especifican hasta 115 proyectos, con descripción de objetivos , tareas, calendarios y recursos de personal disponibles. Se ha comprobado la existencia de controles para el seguimiento de la consecución de tales objetivos, cuyos resultados se plasman en el "Balance de las actividades del INE" documento que, por lo que se refiere a 1990, fue editado en enero de 1991.

Por otra parte, tal como ha sido reiteradamente expuesto por el INE ante los Servicios Centrales del Ministerio, los presupuestos de 1990 y 1991 no tienen en cuenta el cambio de naturaleza jurídica del Organismo, lo que ha provocado la necesidad de tramitar numerosas modificaciones presupuestarias, así como la desatención de compromisos ya asumidos. Esta situación ha afectado principalmente a ciertos conceptos del Capítulo 1 de Gastos (Seguridad Social) y al Capítulo 2 (en el que las dotaciones del ejercicio 1990 eran inferiores en un 8% a las obligaciones reconocidas en 1989). Los recortes presupuestarios efectuados por el Ministerio de Economía y Hacienda en dicho ejercicio han incidido también en la gestión del Organismo.

Análisis de las modificaciones presupuestarias

El desglose de las modificaciones netas producidas en el presupuesto del INE para 1990 es el siguiente, por capítulos y en millones de pesetas:

	Créd. Iniciales	Modif. Netas	Cred.Definitivos
Capítulo 1	6.585	611	7.196
Capítulo 2	1.741	306	2.047
Capítulo 6	7.394	48	7.442
Resto Capítulos	1	2	3
TOTAL	15.721	967	16.688

Según el tipo de modificación, se obtienen las siguientes cifras en millones de pesetas:

Ampliaciones de crédito	153
Incorporaciones de crédito	567
Generación de Crédito	247
TOTAL	967

A este total hay que añadir los 493 millones de pesetas a que ascienden las transferencias de crédito entre los distintos capítulos, compensadas en el cuadro anterior.

En cuanto a la tramitación de las citadas modificaciones, se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación, excepto en un caso:*

- Expediente 151078/91, incorporación al presupuesto de 1991 de un crédito ya incorporado con anterioridad al presupuesto de 1990, por importe de 5 millones de pesetas, con vulneración del artículo 73.2 del TRLGP.

Es de señalar asimismo que la mayor parte de las modificaciones fueron aprobadas al término del ejercicio, resultando en consecuencia poco operativas. La fecha de aprobación del Presupuesto (junio de 1990) y las demoras en la tramitación administrativa son causas determinantes de dicha circunstancia.

Ejecución

La ejecución del Presupuesto de Gastos del INE de 1990 alcanzó el 91% de los créditos definitivos, porcentaje que cabe calificar de satisfactorio teniendo en cuenta las circunstancias antes aludidas en cuanto a la aprobación del Presupuesto y las modificaciones al mismo.

[1] De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la LFTCu, se remite testimonio a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal por las irregularidades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable señalados por el Ministerio Fiscal.

Es de señalar, no obstante, la existencia de un remanente no comprometido al cierre del ejercicio, por importe de 289 millones en el concepto 160 del Presupuesto, cuando la deuda acumulada con la Seguridad Social a dicha fecha alcanzaba la cifra de 1.876 millones de pesetas, en su mayor parte cuota patronal a imputar a dicho concepto presupuestario.

En cuanto al análisis interanual, las obligaciones reconocidas en 1990 (15.130 millones de pesetas) suponen un aumento del 39% sobre el mismo concepto del año anterior (10.871 millones de pesetas). Esta evolución ha de atribuirse al crecimiento de dos Capítulos del Presupuesto: el Capítulo 1, que aumentó un 29%, como consecuencia de la financiación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo y, sobre todo, el Capítulo 6, que creció un 77% por las dotaciones para realizar el Censo Agrario, el Censo de Edificios y Locales y la Encuesta de Presupuestos Familiares. El Capítulo 2, por el contrario, registró una disminución del 6% en el volumen de obligaciones reconocidas.

Los pagos efectuados en el ejercicio alcanzaron la cifra de 13.219 millones de pesetas, quedando pendientes de pago (fundamentalmente por problemas de tesorería) 1.911 millones de pesetas. De este importe, el 81% corresponde a obligaciones reconocidas con cargo al Capítulo 6 de Gastos.

III.1.4.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Examinada una muestra representativa de los expedientes de contratación, tanto del Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos, como del Capítulo 6, se han observado las siguientes deficiencias:

1º) - Resulta significativo el porcentaje de expedientes en los que se aprecia disociación entre el procedimiento de tramitación presupuestaria y el contractual. La aprobación y disposición del gasto se efectuó en estos casos con varios meses de retraso respecto del inicio de las prestaciones e incluso en algunos después de su finalización.Tales expedientes se tramitaron en documento ADOP, (propuesta de gasto y orden de pago simultáneas) incumpliéndose con ello en varias ocasiones los requerimientos de la normativa presupuestaria y contractual.

2º) - Es de señalar, asimismo, la imputación al Presupuesto de 1990 de gastos realizados en 1989 y no contabilizados en dicho año.

3º) - La mayor parte de los expedientes se han adjudicado por contratación directa sin que, en aquellos en que así se ordena por la Ley de Contratos del Estado, consten expresamente las causas que lo aconsejan.

4º) - En cuanto al contenido de los expedientes, éste resulta aceptable, habiéndose observado algunos defectos poco relevantes.

Con independencia de lo anterior, se considera necesario hacer referencia explícita a dos expedientes integrantes de la muestra analizada, en los que parece poco convincente la razonabilidad del gasto, al menos desde el punto de vista económico:

- Contrato con una empresa de servicios por importe de 55 millones de pesetas, cuyo objeto es la organización de la participación del INE en las cinco Ferias del Libro celebradas en España en el 2º semestre del año. Este importe comprende la decoración del stand, los servicio de azafatas y otro personal, limpieza, mantenimiento y gastos generales. Los ingresos obtenidos por el INE en cada una de las ferias señaladas no supera la cantidad de 15.000 pesetas. La recaudación total del INE por venta de publicaciones en 1990 supuso 28 millones de pesetas. El Organismo manifiesta a este respecto que la finalidad de la asistencia a estas ferias es la de dar a conocer al público en general la tarea realizada por el mismo y sus proyectos estadísticos.

- Adquisición de 90.000 bolígrafos con el anagrama INE para su entrega gratuita a las familias colaboradoras en la realización de la Encuesta Básica de Presupuestos Familiares. El gasto de esta adquisición ascendió a 43,7 millones de pesetas (con un precio unitario de 486 ptas.). Dicho importe fue imputado al concepto 640 "Inversiones en inmovilizado inmaterial", como integrante del coste de la citada encuesta, cuando realmente dicho gasto no resulta necesario para la realización de la misma. Por otra parte, ha de indicarse que sólo un 58% de los bolígrafos fueron entregados en el transcurso de dicha Encuesta, distribuyéndose otros en diferentes Encuestas y manteniéndose actualmente un stock relativamente elevado en el almacén de los Servicios Centrales. Todo el proceso de reparto y almacenamiento de los bolígrafos se caracteriza por la inexistencia de un mínimo control.

III.1.5.- PERSONAL

En general, se observa una cierta debilidad del control interno establecido en esta área, facilitada por la concurrencia de competencias de gestión con otros Centros Directivos ajenos al Organismo (principalmente de los Ministerios de Administraciones Públicas, de Economía y Hacienda y, respecto de la Administración periférica, del Interior) y evidenciada por: a) la inexistencia de instrucciones y procedimientos de gestión normalizados (excepto en lo referente a la contratación de personal laboral eventual); b) las deficiencias detectadas en el sistema de ficheros y registros de personal (con omisiones de documentación esencial en algunos expedientes: nombramientos, declaración de incompatibilidades, contratos, altas y bajas de Seguridad Social, etc.); c) defectos de coordinación entre los distintos servicios intervinientes en el proceso de elaboración de las nóminas, liquidaciones de Seguridad Social y pago de retribuciones y d) ausencia de comprobaciones precautorias del contenido de la nómina, de las variaciones económicas y de los apuntes de la cuenta bancaria de pago de nóminas.

Es de destacar especialmente el riesgo implícito en el sistema de pagos de ciertas retribuciones con cargo al Capítulo 6 de Gastos. Dichos pagos son efectuados directamente por el Habilitado, a través de la Caja de efectivo, y mediante la remisión de fondos "a justificar" a los Delegados Provinciales (ver párrafo d, del apartado "Contratación de personal laboral" en este mismo epígrafe, así como el epígrafe III.1.6.).

En función de su importancia, se expresan a continuación los resultados obtenidos en la fiscalización de las nóminas, retribuciones en especie, contratación de personal y atribución de gratificaciones por servicios extraordinarios.

Nóminas

La confección de las nóminas de personal funcionario, laboral fijo y personal contratado con cargo al Capítulo 1 del Presupuesto, se realiza por la Habilitación del INE en un equipo informático de los Servicios Centrales del Ministerio. Las nóminas de personal contratado con cargo al Capítulo 6 se confeccionan por el Departamento de Informática del INE, a través de equipos y programas propios, en tanto que las nóminas de los grandes Censos se realizan directamente por las Delegaciones Provinciales.

Del examen practicado se han observado las siguientes deficiencias: a) el 15% de las variaciones económicas acreditadas en nómina no se encuentra justificado documentalmente, al tiempo que se observan grandes retrasos entre la adopción del acto administrativo y su inclusión en nómina (entre 2 y 5 meses); b) faltan firmas en los listados de cobro por cheque; c) numerosas retenciones -de Mutualidades, judiciales y otras- se gestionan extracontablemente; d) se han observado bastantes errores en la acreditación de retribuciones en nómina, puestos de manifiesto tanto en los informes de fiscalización plena posterior de la Intervención Delegada como por la notable cantidad de cheques anulados; e) el funcionamiento de la cuenta de nóminas no se acomoda a lo previsto por el Decreto 68/1974, toda vez que, a lo largo de 1990, figuran cargados intereses negativos por un importe total de 521.625 pesetas[2], además de ingresos por Venta de publicaciones y salidas de fondos con destino a la Caja de Habilitación para el pago de retribuciones desde ésta última.

En diciembre de 1990, sin crédito presupuestario, se anticiparon con cargo a los ingresos no contabilizados procedentes de EUROSTAT las siguientes cantidades: 7,8 millones de pesetas correspondientes a productividad de funcionarios, 1,9 millones de pesetas por retribuciones ordinarias de personal contratado y 6,9 millones de pesetas por gratificaciones (horas extras) al personal contratado. Dichas cantidades fueron repuestas a la cuenta bancaria que recoge los ingresos de EUROSTAT con fechas diciembre-1991 (15,3 millones de pesetas) y mayo-1992 (1,3 millones de pesetas), tras formalizar al Presupuesto de dichos años las citadas nóminas. Estos anticipos suponen un incumplimiento del régimen establecido en la Ley General Presupuestaria (arts. 59 y siguientes).

Retribuciones en especie

El Reglamento de 2 de febrero de 1948 reconoció a los Delegados Provinciales del I.N.E. el derecho a una retribución en especie consistente en el disfrute de vivienda particular con cargo al Presupuesto del Estado. Tal derecho debe considerarse suprimido por los artículos 23 de la Ley 30/1984, 15.1 y 21 de la Ley 21/1986 y 31.1 de la Ley 33/1987, conforme le fue manifestado al I.N.E. por la Dirección General de Patrimonio en enero de 1988 y por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado en mayo de dicho año. Incluso, en el informe de este último Centro Directivo se indicó la procedencia de declarar la lesividad e impugnar ante la jurisdicción Contencioso-administrativa las órdenes dictadas en 1987 por el Ministerio de Economía y Hacienda por las que se aprobó el arrendamiento de sendas viviendas para los Delegados de Castellón y Málaga.

No obstante, el I.N.E. ha continuado abonando los alquileres de las viviendas ocupadas por algunos Delegados (7,6 millones de pesetas en 1990 por 27 viviendas, imputadas incorrectamente al concepto "arrendamientos" del Capítulo 2, en lugar de hacerlo al concepto "retribuciones en especie" del Capítulo 1) e indemnizando a los Delegados que no ocupan viviendas alquiladas por el I.N.E. (4 millones de pesetas en 1990 imputadas al concepto "retribuciones en especie"). Entre los pagos de alquileres se encuentran las correspondientes a las viviendas de Castellón y Málaga, cuya impugnación en vía contencioso-administrativa se produjo en 1989 y aún no ha sido fallada.

Tanto el disfrute de vivienda particular como las indemnizaciones alternativas se vienen reconociendo indistintamente a quienes ya disfrutaban de ese derecho con anterioridad a la Ley 30/1984 y a quienes han sido nombrados con posterioridad. Si bien no se han formalizado nuevos arrendamientos desde 1987, tampoco el I.N.E. ha rescindido ninguno de los contratos existentes pese a la concurrencia desde la citada fecha de numerosos cambios en la titularidad de los puestos de trabajo indicados.

De todo ello se deduce que el INE ha efectuado retribuciones en especie que no son conformes con la normativa vigente en materia de retribuciones de funcionarios[3].

---

[2] Dichos intereses han sido reintegrados al INE por la entidad bancaria con fecha 22-enero-1992.

[3] Esta conclusión se ha obtenido teniendo en cuenta también, lógicamente, la información recibida el 22 de diciembre de 1992, a la que se refieren las alegaciones". De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la LFTCu, se remite testimonio a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal por las irregularidades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable señalados por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado.

Contratación de personal laboral eventual

El número de contratos de personal laboral eventual celebrados en 1990 por el INE con cargo al concepto 640 "Inversiones de carácter inmaterial" asciende a 17.872. De ellos, 16.718 contratos corresponden al Censo de Edificios y Locales; 598 al Censo agrario y 556 a otras inversiones. Dentro de estas últimas, a su vez, se incluyen 197 contratos correspondientes a las Elecciones al Parlamento Vasco y a las Elecciones al Parlamento de Andalucía, cuya aplicación al Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos se considera incorrecta.

Con cargo al Capítulo 1 se han formalizado 158 contratos bajo la modalidad de "Circunstancias de la producción" y 167 de "interinidad".

Del examen de una muestra representativa de los contratos se ha observado:

a) La formalización de los contratos se acomoda a lo dispuesto por la normativa vigente, constando en los imputados al Capítulo 6 el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos.

b) De las pruebas de nómina realizadas se ha observado el pago de complementos retributivos cuyos conceptos e importes no constan en los contratos, aunque sí en el Convenio Colectivo. Igualmente se ha comprobado el pago de gratificaciones no previstas ni en los contratos ni en el Convenio, que obedecen a la realización de horas extraordinarias.

c) El seguimiento presupuestario de los compromisos de gasto adquiridos en las contrataciones resulta poco satisfactorio dada la ausencia, en algunos casos, de contabilización de las fases anteriores al devengo de las retribuciones, siendo en este momento cuando se tramita el gasto y el pago simultáneamente.

d) El pago de las nóminas correspondientes a contratos de personal con cargo al Censo agrario y al Censo de edificios y locales se efectúa mediante pagos a justificar a través de los Delegados Provinciales y el Habilitado de Servicios Centrales, como ya se ha expuesto. Este sistema supone la asunción de un riesgo bastante notable, dado el volumen de fondos manejado (alrededor de 3.000 millones de pesetas) y la insuficiencia de los controles establecidos sobre el mismo.

Gratificaciones

El INE ha reconocido obligaciones en 1990 por el concepto de gratificaciones al personal por servicios extraordinarios, en cuantía de 216 millones de pesetas. De este importe, únicamente 118 millones de pesetas se han reconocido con cargo al concepto presupuestario 151 "Gratificaciones";al tiempo que, incorrectamente, se han imputado 68 millones con cargo al concepto 150 "Productividad" y 30 millones con cargo al concepto 130.01 "Otras remuneraciones del personal laboral".

Las dotaciones para hacer frente a estas obligaciones se han obtenido mediante expedientes de generación de crédito financiadas con ingresos procedentes de convenios con EUROSTAT y del Ministerio del Interior por trabajos extraordinarios consecuencia de la celebración de elecciones.

En concepto de complemento de productividad se reconocen obligaciones en 1990 por importe de 157 millones de pesetas.

En el ejercicio 1991 el importe de las gratificaciones alcanzó la cifra de 510 millones de pesetas, en tanto que la productividad ascendió a 191 millones de pesetas.

De la documentación aportada por el Organismo, a requerimiento de este Tribunal, no se deduce justificación suficiente sobre la concurrencia de los requisitos legales establecidos para la concesión de estas gratificaciones, es decir, que tengan carácter excepcional, que sean reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y que no sean fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. No resulta suficiente, a tales efectos, el mero hecho de haber participado en alguno de los citados trabajos, como se argumenta en las alegaciones, por cuanto no ha quedado justificado que dichas participación se haya desarrollado en actividad extraordinaria fuera de la jornada normal de trabajo*[4].

III.1.6.- TESORERÍA

Los fondos del Organismo estaban situados, a lo largo de 1990, en las cuentas bancarias y cajas de efectivo siguientes:

	Servicios Centrales	Delegaciones Provinciales	TOTAL
Cuentas ordinarias (Banco de España)	2	-	2
Cuentas de provisión fondos (Bco. España)	1	52	53
" " " (Entidades financieras privadas)	1	34	35
Cuentas restringidas de recaudación E.F.P.	1	-	1
Cuentas de nóminas (Decreto 68/74) E.F.P.	2	-	2
Cajas de efectivo	3	43	46

Respecto al funcionamiento de la Tesorería en general, es de destacar la extrema debilidad del control interno implantado, fundamentalmente en cuanto se refiere a los siguientes aspectos: segregación de funciones; adecuada política de funcionamiento de las Cuentas bancarias y de las Cajas de efectivo; contabilización de las operaciones, etc.. Todo esto ha permitido la manifestación, entre otras, de las deficiencias que se detallan a continuación[5]:

1º - De las 2 Cuentas ordinarias de los Servicios Centrales en el Banco de España, una de ellas es la Cuenta principal del Organismo. La otra se destina a la recepción de ingresos procedentes de la CEE, en virtud de los Convenios de colaboración con el EUROSTAT, cuyos movimientos y saldo al 31/12/1990, por importe de 67 millones de pesetas, no han sido recogidos en Contabilidad. Con cargo a esta última cuenta se han detectado dos salidas de fondos incorrectas: una de ellas, por importe de 16,6 millones de pesetas, para atender los pagos de nómina señalados en el epígrafe III.1.5. de este informe y otra, por importe de 3,5 millones de pesetas, ingresadas en la Caja de Habilitación, para atender gastos menores. Respecto de la primera operación, su importe ha sido reintegrado a la cuenta bancaria al imputar el gasto al Presupuesto en ejercicios posteriores. Respecto a la segunda, las alegaciones intentan justificar su existencia mediante su vinculación a los convenios con EUROSTAT. La opinión del Tribunal sobre este asunto ha sido ya expuesta en el apartado III.1.2, por lo que se mantiene la calificación negativa de la citada disposición de fondos y, en general, de los movimientos de la citada cuenta bancaria, en función de su falta de reflejo contable y presupuestario. Por otra parte, la disposición de dichos fondos ha tenido lugar a través de la Caja de gastos menores, en cuyo libro no constan ni la finalidad ni el perceptor señalados en las alegaciones. Únicamente figura en el mismo que dicho importe se destinó a sufragar otros gastos, principalmente pagos al personal del INE en concepto de "anticipos para gastos de viaje".*

2º - Las Cuentas de provisión de fondos, gestionadas por los Habilitados, recogen los correspondientes a Anticipos de Caja Fija y Pagos a justificar. El Saldo total de dichas cuentas, al 31 de diciembre de 1990, era de 1.441 millones de pesetas. La mayor parte de dicho importe correspondía a libramientos pendientes de justificar del concepto 640 "Inversiones en Inmovilizado Inmaterial", por pago de personal contratado, cuyo importe figura activado en el Balance. No han podido ser aportados al Tribunal los extractos de la cuenta de provisión de fondos de los Servicios Centrales en una entidad financiera privada, por extravío de los mismos según manifestación del Organismo, solventándose dicha circunstancia mediante remisión por dicha entidad, a requerimiento del Tribunal, de los resúmenes mensuales correspondientes.

3º - El INE dispuso, a lo largo de 1990, de dos cuentas denominadas de nóminas. Una de ellas era la antigua cuenta de nóminas del INE como Dirección General que, a lo largo de 1990, se ha utilizado exclusivamente para algún pago circunstancial correspondiente a compromisos de 1989 y para algunos ingresos no contabilizados procedentes de los Convenios firmados con el EUROSTAT. Dicha cuenta ha sido cancelada el 27 de diciembre de 1991. El saldo al 31/12/90 era de 8 millones de pesetas, que no figuran en la cuenta rendida al Tribunal. Las alegaciones a este punto se limitan a aportar unas cifras que coinciden con las señaladas en el Informe. Únicamente añaden las operaciones intermedias entre el saldo a 31.12.90 y la cancelación de la cuenta, sin trascendencia a efectos de lo expuesto en este párrafo.*

En la revisión de las operaciones correspondientes a 1990 de dicha cuenta bancaria, se han detectado dos salidas de fondos a Caja (por 9 y 5 millones de pesetas respectivamente), cuyos importes no figuran reflejados como entrada en el Libro de Caja del Habilitado.

Tales cantidades se utilizaron para anticipar pagos por premios de un concurso de prensa del Censo agrario y por nóminas de personal contratado. En ambos casos se formalizó el gasto posteriormente al Presupuesto.

La otra cuenta de nóminas ha tenido el movimiento típico de una cuenta de tal naturaleza, si bien con los siguientes incumplimientos respecto al régimen establecido por el Decreto 68/1974: a) se han cargado intereses negativos por 521.000 pesetas[6].; b) se han producido ingresos procedentes de Ventas de publicaciones; c) al cierre del ejercicio figuraba un saldo de 14 millones de pesetas, no reflejadas en la Cuenta rendida; d) no se evidencia la realización de comprobaciones y conciliación de los apuntes efectuados en dicha cuenta bancaria.

En cuanto a las Cajas de Efectivo existentes en los Servicios Centrales - Habilitación General, Venta de información estadística y Venta de publicaciones - los datos correspondientes a esta última no han sido aportados. El Saldo al 31/12/1990 de las 45 Cajas de efectivo del Organismo (exceptuando la de Venta de publicaciones reseñada) era de 7.471.604 pesetas.. Es de destacar la debilidad extrema de los controles establecidos sobre todas ellas, dadas: la ausencia de segregación de funciones; la inexistencia de registros fiables; en algún caso, como en la de Venta de publicaciones, la carencia absoluta de registro alguno; la no realización de arqueos periódicos y la falta de control sobre las facturas y las existencias. La inseguridad sobre la salvaguarda de los fondos resulta manifiesta, hasta el punto de que, en febrero de 1992, fue substraída la Caja de Venta de publicaciones, hecho que fue inmediatamente denunciado por el INE a la jurisdicción ordinaria. Posteriormente el Organismo ha instalado dos cajas fuertes en las Áreas de Información y Venta de Publicaciones, respectivamente, que refuerzan considerablemente la seguridad física de los fondos recaudados.

[4] De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la LFTCu, se remite testimonio a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal por las irregularidades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable señalados por el Abogado del Estado.

[5] De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la LFTCu, se remite testimonio a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal por las irregularidades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable señalados por el Ministerio Fiscal.

[6] Ver nota 1.

4º- Por lo que se refiere a los Anticipos de Caja Fija y Pagos a justificar, el control de los Servicios Centrales sobre las Cajas pagadoras resulta insatisfactorio, toda vez que se ha comprobado por este Tribunal que no se efectúa verificación suficiente por la Unidad Central sobre los estados contables rendidos por aquellas. Al propio tiempo, la Intervención Delegada no ha presentado tampoco reparos a los mismos. Pese a ello, en el examen de una muestra seleccionada por el Tribunal se han observado notables anomalías, (entre las que destaca la no rendición del estado de situación de tesorería por dos Delegaciones Provinciales) y defectos formales en los estados de 32 Delegaciones, (tales como la falta de firma del Cajero-Pagador, omisión de los extractos bancarios, falta de realización de conciliaciones bancarias o presentación de conciliaciones incorrectas). En el examen de la documentación justificativa de los pagos se ha observado también algunos por importe superior a 500.000 pesetas., en conceptos no autorizados (incumpliendo el art. 2.3 del Real Decreto 725/89) y la aplicación incorrecta de algunos gastos, cuya circunstancia es especialmente significativa en la Delegación Provincial de Madrid, en donde alcanza el 9% de los mismos, amén de otros defectos de menor relevancia.

Al 31/12/1990 el importe de los libramientos a justificar de 1990 pendientes de cumplir dicho trámite, o de reintegro, alcanzaba la cuantía de 3.250 millones de pesetas. De esta cantidad, 3.233 millones correspondían al Capítulo 6, en su práctica totalidad por el pago de nóminas de personal contratado. Cerca de la mitad de esta última cifra no se había pagado aún al cierre del ejercicio y figuraba como saldo en cuentas bancarias.

III.1.7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) El control interno del Organismo presenta debilidades, tanto por lo que se refiere al establecimiento del propio sistema (plan de organización; directrices; coordinación; segregación de funciones) como a su ejercicio práctico (registros contables; inventarios; comprobación de documentos, cuentas bancarias y cajas de efectivo; autorizaciones). Estas debilidades se han observado principalmente en las áreas de Inmovilizado, Existencias, Ingresos, Personal y Tesorería.

Se recomienda para su subsanación la redefinición del sistema, la confección de manuales de procedimiento, la sistematización o creación de registros y documentos normalizados, la reordenación de competencias (separando las funciones de gestión, contabilidad y tesorería) y el establecimiento de comprobaciones efectivas.

B) La contabilidad debe ser mejorada mediante la formación y permanente actualización de un inventario completo de bienes muebles, inmuebles y existencias, la integración en el sistema contable de todas las retenciones practicadas, ingresos, derechos pendientes de cobro y deudas, así como la incorporación al inmovilizado inmaterial del coste imputado por la parte de los trabajos realizados con medios propios. El Tribunal considera también imprescindible el desarrollo del grupo III (Existencias) en el Plan de Contabilidad adaptado al INE.

C) En la gestión de ingresos cabe destacar tres deficiencias: a) el reconocimiento de derechos por transferencias a recibir del Ministerio de Economía y Hacienda, cuyos correspondientes créditos de gasto del Ministerio fueron anulados; b) el insatisfactorio sistema establecido para la gestión de las ventas de publicaciones y prestación de servicios y c) la existencia de ingresos no contabilizados, una parte de los cuales se utilizó para anticipar pagos por falta de crédito presupuestario.

Aparte de la subsanación de estas anomalías, mediante la anulación de los derechos indebidamente reconocidos (1.460 millones de pesetas en 1990) y la imputación presupuestaria de los ingresos no contabilizados (243.920.052 pesetas al 31-12-1991), el INE debe tomar medidas adecuadas a fin de evitar la pervivencia o repetición de los mismos.

D) El proceso de elaboración del Presupuesto de Gastos del Organismo debe ser revisado, al objeto de acomodar el mismo a los requerimientos de un presupuesto por programas. Para ello deberá adecuarse el establecimiento de objetivos e indicadores a su verdadera actividad e implantar un sistema de seguimiento satisfactorio.

E) En el apartado de contratación debe extremarse el cumplimiento de la normativa presupuestaria relativa a los trámites contractuales e integrar debidamente los expedientes con justificación suficiente y motivada de su necesidad para el interés público, de la razonabilidad del gasto y, en su caso, de las causas que aconsejan la contratación directa.

F) Se han apreciado notables deficiencias en el área de Personal, entre las que sobresalen las siguientes: a) debilidad del control interno (registros y procedimientos), b) defectos en la confección y justificación de la nómina, c) realización de pagos sin crédito presupuestario, que han sido anticipados con ingresos no contabilizados y posteriormente formalizados al presupuesto de ejercicios posteriores, d) funcionamiento no reglamentario de la cuenta bancaria de nóminas, e) abono improcedente de retribuciones en especie, f) abono de gratificaciones respecto de las que no se ha justificado la concurrencia de los requisitos legales establecidos y, en parte, incorrectamente imputadas al presupuesto.

El INE debe proceder a racionalizar la gestión de personal a través de las siguientes medidas: a) el establecimiento de instrucciones y procedimientos adecuados, b) la unificación de la formación y responsabilidad de las nóminas y liquidación a la Seguridad Social, c) el escrupuloso respeto de la disciplina presupuestaria, d) el control de la cuenta bancaria de nóminas y e) la supresión del abono de retribuciones no procedentes o no justificadas.

G) En cuanto a la Tesorería, es de notar la inexistencia de un plan de gestión de los fondos y recursos disponibles. Ello, sumado a otras circunstancias, ha generado improvisación y, en algunos casos, situaciones de conflicto legal (retrasos en el ingreso de las retenciones, utilización de ingresos no contabilizados para anticipar pagos, deuda con la Seguridad Social, etc.). El abono de las nóminas de personal contratado a través del sistema de pagos a justificar incorpora un riesgo apreciable, dado su volumen (alrededor de 3.000 millones de pesetas) y la insuficiencia de los controles establecidos al respecto. Al cierre del ejercicio permanecían sin justificar 3.250 millones de pesetas librados en 1990, de los cuales cerca de la mitad no habían sido aún pagados a los perceptores últimos.

Al objeto de subsanar las deficiencias observadas en esta área, se recomienda: a) el nombramiento de un responsable de la ejecución de la política de Tesorería del Organismo, con suficiente dedicación; b) la aprobación de un plan global de funcionamiento que pueda ser desarrollado mediante planes de disposición de fondos temporales, adecuando el reconocimiento de obligaciones y órdenes de pago al flujo de recursos obtenidos; c) la optimización del número y utilización de las cuentas bancarias y d) el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras tanto de las retenciones practicadas como del resto de obligaciones a cargo del Organismo.

En el recurso al sistema de pagos a justificar, el INE deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, tanto en lo relativo a los casos en que pueden ser utilizados como en lo relativo a su justificación y reintegro. Este Tribunal considera que el INE tiene a su disposición suficientes mecanismos financieros como para rechazar la utilización del sistema de pagos a justificar en los procedimientos de nóminas del personal contratado, debiendo ser sustituido el mismo por el sistema normal utilizado para el personal de la Administración.

III.2.- EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE BIENES E INVERSIONES REALES DEL ESTADO. ALQUILERES Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Los objetivos fijados para esta fiscalización se circunscriben al análisis del control interno implantado, al de los procedimientos de actuación seguidos y a la verificación de la correcta contabilización e imputación presupuestaria de los derechos reconocidos en los conceptos afectados. De estos objetivos tiene especial relevancia el que se refiere al análisis del control interno, toda vez que en la comprobación de la salvaguarda de la integridad de los fondos públicos resulta dificultoso detectar los ingresos no contabilizados ni canalizados a través de cuentas públicas.

Los conceptos presupuestarios que constituyen el ámbito de la fiscalización, y la cifra de derechos reconocidos que figura en la Cuenta General del Estado son los siguientes (en millones de pesetas):

Capítulo III - Tasas y otros ingresos

Concepto 309 - Venta de otros bienes	13.657.-

Capítulo VI - Enajenación de Inversiones reales

Concepto 600 - Ventas de solares	303.-
Concepto 619 - Venta de otras inversiones reales	30.493.-

Capítulo V - Ingresos patrimoniales

Concepto 540 - Alquileres y producto de inmuebles	375.-
Concepto 550 - Productos de concesiones administrativas	289.-

El alcance temporal del trabajo viene en general referido al ejercicio presupuestario 1990, si bien en algún caso se analizan actuaciones anteriores o posteriores al mismo, a efectos de presentar resultados relevantes completos sobre la operación o aspecto examinado. En este aspecto, destaca en concreto la operación analizada en el epígrafe "Venta de metales preciosos", iniciada en 1984.

No se han presentado limitaciones esenciales en el desarrollo del procedimiento de fiscalización, excepto las derivadas de las deficiencias de inventario, contabilidad y coordinación que se describen en cada área. Estas no han impedido, sin embargo, obtener evidencias suficientes sobre los objetivos fijados.

En el desarrollo de los trabajos se han aplicado las técnicas de auditoría convencionales, destacando la multiplicidad de centros de información y de gestión visitados, entre los que se pueden citar: Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Delegación de Economía y Hacienda de Madrid, Dirección General de Patrimonio del Estado, Dirección General de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General para la Vivienda y Arquitectura y Dirección General de Transportes Terrestres. Se ha obtenido igualmente documentación relevante mediante circularización a las 57 Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda.

Se exponen seguidamente los resultados obtenidos:

III.2.1.- CONTROL INTERNO

Dado el carácter general de las debilidades de control interno que se han manifestado en todos los ámbitos objeto de esta fiscalización, parece oportuno exponer dichas debilidades en este

epígrafe de forma independiente y global. Ello no obsta para que, cuando se considere conveniente, se realice una exposición más particularizada al analizar el contenido y los resultados de las distintas fiscalizaciones realizadas.

Las principales debilidades evidenciadas son:

a) La inexistencia de instrucciones claras y detalladas, así como de manuales de procedimiento, para la gestión de los ingresos examinados. Las competencias de los intervinientes en el proceso no siempre aparecen claramente delimitadas o son suficientemente conocidas, careciéndose de un sistema de coordinación al efecto. Estas debilidades han generado numerosos errores contables y de aplicación presupuestaria, junto a defectos importantes en la gestión de deudores.

b) La ineficacia del sistema de control contable establecido, hasta el punto de que, para gran parte de los ingresos examinados por este Tribunal, se carece en la Oficina Contable correspondiente de información básica sobre la naturaleza de los bienes enajenados, los precios aplicados, la periodicidad de la recaudación y los pagos aplazados. Incluso, en algunos casos ni siquiera se conoce el Centro Gestor que ha hecho el ingreso.

c) En ninguno de los Centros visitados se han practicado las "actuaciones comprobatorias posteriores" a que se refiere el art. 95.6 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

d) La inexistencia de un inventario pormenorizado de los bienes muebles e inmuebles del Estado, con reseña de su situación jurídica, lo que ha imposibilitado un control básico sobre enajenaciones, alquileres y concesiones administrativas. Respecto a los bienes muebles, y a pesar de la aseveración contenida en las alegaciones de ser usual la existencia de inventarios independientes en cada Dirección General, este Tribunal ha comprobado que la mayor parte de los centros visitados no disponen de dichos inventarios o bien que los existentes presentan graves defectos. En cuanto a la oportunidad o no de formar un Inventario General de bienes muebles, sobre el que no se hacía mención en este Informe, corresponde al Gobierno estimarla. En todo caso, este Tribunal considera imprescindible el establecimiento por lo menos de inventarios parciales rigurosos y actualizados.*

e) El prácticamente nulo control establecido sobre las existencias de bienes disponibles para la venta en los almacenes (impresos, publicaciones, etc...). Las alegaciones justifican esta falta de control en su "reducido valor monetario". A estos efectos es de señalar a título indicativo que, como consta en otro lugar de este mismo Informe, se han contabilizado en 1990 ingresos procedentes de la venta de publicaciones por valor de 949 millones de pesetas. En lo que se refiere al control, el Gobierno opina que las existencias "deben ser controladas en los almacenes por los responsables correspondientes". Aparte de que este Tribunal ha comprobado que ni aún en dicho ámbito reducido existe suficiente control, se olvida en el planteamiento la íntima relación que tiene el control de las existencias con el control de las ventas y su recaudación, ámbito éste que presenta importantes riesgos por las carencias descritas en este Informe.*

f) Aunque resulta aceptable el control establecido sobre la integridad de los fondos, una vez que han sido ingresados en cuentas restringidas de recaudación, en las Delegaciones y Administraciones de Hacienda o en la Dirección General del Tesoro, no ocurre lo mismo con las fases anteriores. En éstas, la extrema debilidad de los controles existentes no permite asegurar objetivamente dicha integridad. Son numerosos los Centros que perciben ingresos a través de Cajas de metálico sin el mínimo control exigible (separación de funciones, facturas prenumeradas, arqueos periódicos, etc...).

g) La falta de desarrollo, en el ámbito de la gestión, del sistema general contable relativo a los ingresos examinados. El reflejo de éstos en la contabilidad del Estado no se produce hasta el momento en que la recaudación llega a la Dirección General del Tesoro o a las Delegaciones y Administraciones de Hacienda, casi siempre mediante el sistema de "contraído por recaudado" y con serias deficiencias de información. Se recomienda, a este respecto, el urgente desarrollo del sistema contable para dar cabida a todo el proceso de la gestión de ingresos.

En función de todo ello, este Tribunal considera prioritaria una acción inmediata de la Administración para la mejora del control interno en el área de gestión de los ingresos a que se refiere este informe, control que ha sido muy deficiente durante el período fiscalizado.

III.2.2.- VENTA DE BIENES DEL ESTADO

Este epígrafe se ocupa del examen de los ingresos imputados al concepto presupuestario 309, "Venta de otros bienes". Dentro del mismo se han contabilizado de forma conjunta los seis códigos que forman el artículo presupuestario 30, a pesar de que inicialmente se habían previsto por separado en la Orden de 13-2-1989 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Según se ha comprobado por el examen de los documentos de imputación presupuestaria, únicamente el 29% de los derechos contabilizados en este concepto responden a la naturaleza económica propia del art. 30 del Presupuesto. La correcta aplicación del total de los derechos imputados a dicho artículo se puede desglosar como sigue (en millones de ptas.):

*** Derechos aplicados correctamente (art. 30)**	
Venta de publicaciones propias	949.-
Venta de medicamentos	1.287.-
Venta de otros bienes	1.692.-
SUBTOTAL	3.928.-
*** Derechos incorrectamente imputados**	
a) Prestaciones de servicios (art.31)	
- Prestación de servicios de Correos	2.665.-
- Estancias hospitalarias Mº Defensa	2.189.-
- Compensación cargos transporte aéreo	1.016.-
- Otras prestaciones de servicios	1.600.-
b) Ingresos correspondientes a otros artículos del capítulo 3	875.-
c) Cuotas de derechos pasivos (cap. 1)	5.-
d) Ingresos patrimoniales (alquileres y concesiones) (cap. 5)	12.-
e) Enajenación de inversiones reales (cap. 6)	395.-
SUBTOTAL	8.757.-
*** Otros ingresos cuya naturaleza no consta en los talones de cargo**	972.-
TOTAL	13.657.-

Dentro de los derechos aplicados correctamente, se ha elegido una muestra representativa al objeto de verificar los procedimientos seguidos y los controles aplicados. Dicha muestra está integrada por las siguientes operaciones:

- Venta de impresos de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio (402 millones de pesetas)

- Venta de cartones de bingo (998 millones de pesetas), perteneciente, como el anterior, al concepto "Venta de otros bienes".

- Venta de publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (28 millones de pesetas. Sus resultados se exponen en el apartado III.1 de este Informe Anual).

En cuanto a los derechos incorrectamente aplicados, se ha considerado conveniente comprobar también, dada su contabilización en este concepto, la gestión de los ingresos por prestación de servicios en el Laboratorio de la Subdirección General de Normativa Básica y Tecnología (antiguo I.N.C.E.), por importe de 47 millones de pesetas, y una enajenación de inversiones reales efectuada por la Dirección General de Transportes Terrestres (231 millones de pesetas).

Los principales resultados obtenidos en cada caso han sido los siguientes:

III.2.2.1.- Venta de impresos del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio

La mayor parte del importe a que asciende la cantidad contabilizada en este apartado (402 millones de pesetas) se corresponde con la campaña de renta de 1989, desarrollada en la primavera de 1990. No obstante, dentro de dicha cifra se recogen también algunos ingresos correspondientes a declaraciones de 1988 presentadas con demora, así como una pequeña cantidad procedente de la venta como papel de los impresos sobrantes.

La elaboración de estos impresos corre a cargo del Ministerio de Economía y Hacienda (al contrario que el resto de impresos de declaraciones tributarias - IVA, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, etc... - que son elaborados por el Colegio de Huérfanos de Hacienda). En la gestión de su venta participan las Direcciones Generales de Servicios y de Gestión Tributaria y, en el ámbito periférico (actuando como punto de venta), las Delegaciones y Administraciones de Hacienda, a las que hay que añadir las redes de distribución de Tabacalera, S.A..

El atípico sistema de ingresos y pagos establecido respecto a la recaudación producida por la venta de los impresos es el primer aspecto a señalar en la gestión de estos conceptos:

a) Por lo que se refiere a los **impresos vendidos por Tabacalera, S.A.**, se producen varias detracciones directas sobre el importe de la recaudación que minoran el importe ingresado en las arcas públicas, con infracción de lo dispuesto en el art. 58 de la Ley General Presupuestaria. Así, se han observado: a) detracciones por gastos de transporte y acarreo, b) comisiones por la prestación del servicio de venta, por un total del 20% del importe bruto de las ventas, y c) un premio del 9,5% de dicho importe bruto de ventas a favor del Colegio de Huérfanos de Hacienda. Estos últimos porcentajes están establecidos por Orden Comunicada del Ministerio de Economía y Hacienda.

b) **Respecto a la venta directa en Delegaciones y Administraciones** de Hacienda, los porcentajes de distribución del importe de la recaudación fueron establecidos por instrucciones de la Junta de Gobierno del Colegio de Huérfanos de Hacienda dirigidas a las Delegaciones y Administraciones. Un 77,5% de dicho importe corresponde al Tesoro Público y el 22,5% restante se distribuye como sigue: un 9,5% a favor del Colegio, un 8% en favor del Tesoro

Público, en concepto de entrega del Colegio de Huérfanos, y constituyendo el 5% restante la "compensación por quebranto de moneda". En este sistema pueden observarse varias irregularidades, tales como: a) la falta de competencia de la Junta de Gobierno para dictar las instrucciones mencionadas, b) la percepción injustificada del 5% por quebranto de moneda, respecto al cual no ha sido aclarado a este Tribunal ni su destino ni sus perceptores y c) el incumplimiento del art. 58 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria citado, en tanto que los porcentajes anteriores, así como los gastos de transporte y acarreo han sido deducidos directamente del producto íntegro de la venta.

Las alegaciones a los párrafos que anteceden intentan justificar el sistema descrito y el incumplimiento del art. 58 L.G.P. en base a una pretendida analogía con la venta de efectos timbrados. Esta Tribunal no comparte dicha argumentación por cuanto que ni el art. 4.1 del Código Civil ni el resto del ordenamiento jurídico admiten la posibilidad de excepcionar una norma imperativa por la vía de la interpretación analógica. Con independencia de lo anterior, las disposiciones citadas por el Gobierno (Ley 38/85 y R.D. 2340/85) no permiten tampoco sustentar dicha analogía, ni aún siquiera forzando su interpretación. En efecto, la Ley 38/85 se limita a fijar un porcentaje de comisión, sin referencia alguna al procedimiento de liquidación y contabilización de los ingresos, mientras que el Real Decreto se refiere exclusivamente a la clasificación, provisión y trasmisión de las expendedurías.*

Por otro lado, el control interno observado en todo el proceso resulta deficiente. Esta crítica, que afecta tanto a las Delegaciones y Administraciones de Hacienda como a los Servicios Centrales del Ministerio (Dirección General de Servicios) obedece a las deficiencias siguientes, que se han detectado durante la fiscalización: ausencia de normas detalladas de gestión, lo que se traduce en diferencias entre el procedimiento seguido por los distintos Centros; indeterminación del responsable de la gestión de este ingreso en cada punto de venta; sistema de registro inadecuado y con abundantes errores; falta de seguridad en la distribución y almacenamiento de los impresos; ausencia de controles sobre las existencias y sobre las ventas; falta de conciliaciones y de supervisión; y, finalmente, desconocimiento en los Servicios Centrales de la cifra de ingresos producto de estas ventas.

Examinando las cuentas presentadas por las distintas Delegaciones y Administraciones, se han observado notorias faltas de coherencia interna. Así, en 20 Delegaciones y 11 Administraciones figuran contabilizados ingresos dentro del epígrafe correspondiente al 77,5% de las ventas brutas, sin que figure cantidad alguna en el 8% relativo a las entregas del Colegio de Huérfanos. La situación contraria aparece en 3 Delegaciones, mientras que en 1 Delegación y 8 Administraciones aparecen contabilizadas cantidades que corresponden a porcentajes distintos de los aprobados.

III.2.2.2.- Venta de cartones de bingo

Los ingresos correspondientes a este concepto (998 millones de pesetas) proceden, en su mayor parte, de la Delegación Especial de Hacienda de Madrid (78%) y, en menor medida, de las Delegaciones de Baleares, Navarra, Cantabria, Ceuta y Melilla. En el resto del territorio nacional, estos ingresos han sido cedidos a las Comunidades Autónomas respectivas.

En razón a su peso específico, se ha considerado suficiente proceder a la comprobación "in situ" del sistema establecido en la Delegación Especial de Hacienda de Madrid.

Los resultados de la fiscalización permiten deducir que el control interno establecido es satisfactorio, ya que la gestión de la venta de los cartones se encuentra vinculada a la de la tasa correspondiente, regulada por Real Decreto 2221/1984, de 12 de diciembre, que establece suficientes garantías. De igual modo, tanto el sistema de registro como la salvaguarda de los activos pueden considerarse también satisfactorios.

III.2.2.3.- Prestación de servicios por el Laboratorio de la Subdirección General de Normativa Básica y Tecnología

Los ingresos que se analizan en este apartado (47 millones de pesetas) proceden de la realización de ensayos de caracterización de materiales de construcción efectuados por el laboratorio mencionado en el encabezamiento. Dicho laboratorio, anteriormente denominado Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación (INCE), depende en la actualidad de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la Subdirección reseñada.

De las verificaciones realizadas se deduce que el sistema de control interno establecido presenta algunas deficiencias que resulta preciso corregir. Más concretamente, se recomienda un mayor rigor en las autorizaciones para los servicios prestados y no cobrados a la entrega de los trabajos, la mejora del sistema de registro y la realización con mayor frecuencia (y obligatoriamente al cierre del ejercicio) de conciliaciones y arqueos de la caja de efectivo.

Respecto de la gestión de los ingresos, cabe efectuar las siguientes observaciones:

- La Subdirección General fija libremente los precios por los servicios que presta, contraviniendo lo dispuesto en el art. 26.1.a) de la Ley de 8/1989 de Tasas y Precios Públicos, que exige su aprobación por Orden Ministerial.

- No figura en la Cuenta rendida al Tribunal el importe de los derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, por importe de 29.543.547 pts..

- Todos los ingresos por estos servicios han sido aplicados incorrectamente al concepto 309 "Venta de otros bienes", en lugar de hacerlo al 319 "Prestación de otros servicios". Se sigue además el método de "contraído por recaudado", pese a la existencia de información suficiente para la contabilización de los derechos reconocidos pendientes de cobro, si bien este defecto es imputable al sistema general contable establecido.

III.2.2.4.- Ingresos obtenidos en la Dirección General de Transportes Terrestres

Estos ingresos se refieren a la enajenación por subasta de carriles y traviesas procedentes de la línea de ferrocarril abandonada Baeza-Utiel, cuyo importe total es de 230.590.002 pesetas (netos de IVA).

Aparte de la incorrecta aplicación presupuestaria al concepto 309, "Venta de otros bienes", en lugar del 619 "Venta de otras inversiones reales", como era procedente, se han observado las siguientes deficiencias en el expediente formado al efecto:

- No se ha respetado el artículo 23.2 del Reglamento del IVA sobre devengo del citado Impuesto, al recaudar el primer plazo del precio en junio de 1990. El IVA total devengado, por importe de 27.670.800 pesetas, se repercutió en octubre de 1991 con ocasión del segundo y último plazo.

- En cuanto al proceso de gestión, es de destacar: a) la lentitud con la que se procedió a realizar la operación examinada (el Acuerdo de Consejo de Ministros que la ordena es de febrero de 1984); b) el incumplimiento del plazo fijado en el pliego de condiciones para la finalización de los trabajos de retirada de materiales, con un exceso de 278 días; c) la demora de 36 días en el pago del segundo plazo del precio fijado en el contrato y d) la ausencia de cálculos económicos en la fijación del precio de salida de la subasta (90 millones de pesetas).

III.2.3.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DEL ESTADO

Dentro de este epígrafe se analizan los ingresos procedentes de dos conceptos. Por una parte, la venta de solares, bienes del Estado y otras inversiones reales, por importe de 2.898 millones de pesetas. De otra, la venta de metales preciosos al Banco de España, por cuantía de 27.898 millones de pesetas. Esta última operación puso fin a un proceso que se inició en el año 1984 y al que se hará también una referencia.

III.2.3.1.- Venta de solares, bienes del Estado y otras inversiones reales

Del examen de la Cuenta de liquidación del Presupuesto, concepto 600 "Venta de solares", destaca, en primer lugar, la importante desviación en su ejecución, ya que se reconocen derechos por importe de 303 millones de pesetas, frente a una previsión de 11.000 millones de pesetas (grado de ejecución 2,75%). Debe tenerse en cuenta también, a este respecto, que, según se ha detectado en la fiscalización practicada, al menos 1.014 millones de pesetas figuran incorrectamente imputadas en otros conceptos presupuestarios (30 millones en el 309 "Venta de otros bienes de Estado" y 984 millones en el 619 "Venta de otras inversiones reales").

En el concepto 619 "Venta de otras inversiones reales" figuran derechos contraídos por importe de 30.493 millones de pesetas, de las cuales 27.898 millones corresponden a la operación de venta de metales preciosos al Banco de España. Si se excluyera este importe y los 984 millones correspondientes a Venta de Solares, el concepto 619 recogería únicamente 1.976 millones de pesetas de derechos reconocidos (incluyendo 365 millones incorrectamente aplicados al concepto 309 "Venta de otros bienes"), frente a una previsión de 19.000 millones, lo que implica un grado de ejecución del 10,4%.[7]

Examinados los expedientes que han dado lugar a estos derechos se observa:

- La inexistencia de un sistema completo y fiable de registro y control de los expedientes y de los pagos aplazados, no pudiendo calificarse como tal las "hojas de control" que, con serias deficiencias, lleva la Dirección General de Patrimonio.

- La ausencia de instrucciones, de un manual de procedimientos y, en general, de actividades de coordinación entre la Dirección General de Patrimonio, las Secciones de Patrimonio de las Delegaciones de Hacienda y las Oficinas Contables (Intervenciones Territoriales).

- La existencia de discrepancias importantes entre los datos manejados por la Dirección General de Patrimonio y los de ejecución del Presupuesto.

- La incorrecta aplicación presupuestaria de la mayor parte de los derechos reconocidos contabilizados en estos conceptos.

- La ausencia de contabilización de al menos 3.107 millones de pesetas, importe de los pagos aplazados correspondientes a los expedientes examinados.

- La omisión de imputación presupuestaria de los depósitos previos constituidos, por importe de 7 millones de pesetas.

[7] Incidentalmente, se ha visto que en el concepto 53402 "Dividendos y Participación en Beneficios de Salinas de Torrevieja" figuran incorrectamente imputados 390 millones de pesetas que no se corresponden con dicha naturaleza, sino con el primer pago de la compensación por supresión y liquidación anticipada de cánones existentes en dicho contrato de arrendamiento, por un importe total de 1.860 millones de pesetas, cuyos derechos pendientes de cobro no se encuentran contabilizados.

III.2.3.2.- Venta de metales preciosos al Banco de España

La liquidación del Presupuesto de Ingresos del Estado de 1990 recoge la contabilización de 27.898 millones de pesetas en concepto de venta al Banco de España de oro y plata propiedad del Tesoro Público, en cumplimiento de la autorización conferida por el art. 55 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para dicho año.

Examinando el expediente formado por la Dirección General del Tesoro al efecto, se observa que el importe señalado se desglosa en las siguientes partidas (en millones de pesetas):

-Lingotes de oro	512.809´307 onzas troy[8]	=18.368.-
-Monedas de oro	107.754´755 onzas troy	= 4.667.-
-Lingotes de plata	12.128.199´911 onzas troy	= 4.863.-
		27.898.-

Del análisis del expediente se deduce que dicha operación cumplió los requisitos legales aplicables. No obstante, en lo que se refiere a la valoración de las monedas hubiera sido deseable un mayor rigor tanto en la determinación de sus características propias como en la atribución de valor individual a las mismas, en función de su especificidad, estado de conservación, y situación del mercado. El documento que sirvió de base para la valoración fue un estudio de carácter general de una institución financiera internacional, que fijaba el valor de mercado de un conjunto de monedas mediante un intervalo en función de sus características numismáticas. En todas las monedas objeto de la venta examinada se aplicó de forma sistemática el valor inferior del intervalo, de lo que parece deducirse que, mediante un mayor rigor en la valoración individualizada de las monedas, podrían haberse incrementado los ingresos del Tesoro por esta operación, en detrimento, lógicamente, de los resultados del Banco de España.

El objetivo, en todo caso, de esta operación era la centralización en el Banco de España de todos los activos de metales preciosos, finalidad a la que la venta analizada dio cumplimiento al liquidar todas las existencias obrantes en el Tesoro.

Con esta operación se concluyó un proceso iniciado en abril de 1984. En esa fecha se propuso por la Dirección General del Tesoro y se aprobó por el Ministro de Economía y Hacienda, la conversión en oro de 950.600 Kg. de plata fina, procedente de la desmonetización acordada por Decreto 3478/1975 de 19 de diciembre. El objetivo de dicha conversión era la venta del oro al Banco de España y su inclusión en las reservas exteriores, al tiempo que rentabilizar los activos de plata durante el período que durase el proceso de conversión. Este se realizó de la forma siguiente:

1.- La operación se contrató en junio de 1984 con un operador internacional en los mercados mundiales de metales preciosos (Londres, Zurich, Nueva York), quien se encargó del depósito de la plata, su venta paulatina y la compra simultánea del oro. A medida que se fueron realizando operaciones, el oro se fue depositando en las cuentas abiertas por el Banco de España a favor del Tesoro Público en el Banco Internacional de Pagos de Basilea y en el Banco de Inglaterra.

2.- A lo largo de 1984 y 1985, 18.434.276 onzas troy de plata (equivalentes a 573.370 Kgs.) fueron situadas en el mercado internacional para ser objeto posteriormente de las siguientes transacciones:

- 3.685.747 onzas troy de plata fueron convertidas en 69.932 onzas troy de oro, mediante operaciones simultáneas de compraventa.

- 11.932.615 onzas troy de plata fueron vendidas al Banco de España en 1985.

- 2.815.914 onzas troy de plata fueron vendidas al Banco de España en 1986, con lo que se liquida el total de plata en manos del operador internacional.

Durante los años siguientes no se produjo ninguna nueva operación en este proceso, hasta el año 1990 en el que se liquidaron las existencias del Tesoro Público, tanto de plata como de oro y monedas, a través de la venta comentada al comienzo del epígrafe.

El análisis de eficacia de todo el proceso en su conjunto, no permite emitir un juicio favorable, ya que únicamente se logró convertir en oro el 27% de la plata situada en el mercado internacional (16% del total de las existencias), al tiempo que la centralización de los metales preciosos en el Banco de España se demoró seis años.

El rendimiento conseguido a través de comisiones por depósitos irregulares de plata a plazo, premios por venta a futuros de opciones de compra y otros ingresos financieros no ha superado la cifra de 58 millones de pesetas en todo el período. Por lo que se refiere a los costes, únicamente se ha podido llegar a conocer el coste de los traslados de plata producidos en 1984 (6 sobre un total de 11), que ha supuesto aproximadamente 20 millones de pesetas, no habiendo sido facilitados a este Tribunal más datos al respecto por parte de la Dirección General del Tesoro. Resulta imposible, por tanto, emitir opinión sobre la eficiencia de la operación efectuada, si bien la comparación de la escasa rentabilidad obtenida con los costes de traslado, gastos financieros, comisiones, etc., que acompañan una operación de esta envergadura, llevaría a estimar que la misma ha sido bastante reducida.

[8] La onza troy es la unidad de peso habitual en el mercado de metales preciosos. Una onza troy equivale a 31,103495 grs.

Por último, es de notar asimismo la ausencia de un correcto reflejo y tramitación presupuestaria de algunas de las operaciones ejecutadas por el operador internacional, aplicadas al Presupuesto a posteriori por su resultado neto.

III.2.4.- ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES

Al igual que en la revisión de otros conceptos de ingresos, se hace patente en este apartado la extrema debilidad del control interno implantado, que se manifiesta en la ausencia de normas de procedimiento e instrucciones adecuadas; la falta de coordinación entre la Dirección General de Patrimonio, Delegaciones de Hacienda y Oficinas Contables (Intervenciones Territoriales); la inexistencia de registros de control sobre la situación jurídica y financiera de los contratos; la ausencia de contraído previo, y la falta de seguimiento de cobros y de deudores, entre los aspectos más destacados.

Por otra parte, del examen de los contratos de alquiler obrantes en la Dirección General de Patrimonio, se han obtenido los siguientes resultados:

- Contratos suscritos el 9-10-1987 con Tabacalera, S.A. para el arrendamiento por cinco años de siete inmuebles propiedad del Estado, por un importe anual en conjunto de 52.086.000.- pts. (IVA incluido) y sometidos a revisión anual de acuerdo con el índice de precios de la vivienda. Dadas las carencias de control interno expuestas, la mencionada Dirección General desconocía la situación del citado importe, al propio tiempo que, de la documentación requerida por el Tribunal a las Delegaciones de Economía y Hacienda, se evidenció la no percepción de tales derechos. A consecuencia de los trabajos de fiscalización, Tabacalera, S.A. ingresó el 15-6-1982 en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Madrid la cantidad de 322.178.768 pesetas, correspondientes a este contrato.

- En idéntica situación se encuentran los siete contratos suscritos el 9-3-1989 con la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (CETARSA), por un importe anual de 95.693.562.- pts. (IVA incluido), sujeto a revisión de precios, y una duración de cinco años. Esta Compañía también ha ingresado el 19-6-1992 en la citada Delegación la cantidad de 430.688.308 pesetas por los contratos aquí examinados.

- Contrato de explotación con la Bolsa de Comercio de Madrid del edificio en el que tiene su sede. Dicho contrato, que fue prorrogado en 1974 por 50 años, prevé una cláusula de revisión quinquenal de precios. La tercera revisión debería haberse efectuado en 1988, sin que hasta la fecha se haya procedido a ello. Conforme al coeficiente multiplicador del período, el precio del quinquenio 1982-1987, de 24.057.000.- pts., debería haber pasado a 36.037.386 millones de pesetas para el período 1988-1992. Tampoco se ha exigido por la Dirección General del Patrimonio el cumplimiento de ciertas obligaciones generales fijadas en el contrato, como la rendición de las cuentas anuales de ingresos y gastos y la cuenta de obras. Al igual que en los casos anteriores, la Dirección General de Patrimonio carece de antecedentes sobre el cobro de las cuotas establecidas.

- La citada Dirección General tiene contratados los servicios profesionales de administración de las fincas patrimoniales situadas en Madrid y Barcelona. Los dos administradores liquidan periódicamente los ingresos producidos por su gestión, detrayendo de los mismos el importe de los gastos ocasionados por el mantenimiento y administración de los bienes. Esta práctica supone una violación del art. 58 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria que establece el principio de " presupuesto bruto".

Los ingresos netos efectuados en el ejercicio 1990 por ambos administradores en el Tesoro ascendieron a 28 millones de pesetas.

III.2.5.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Los derechos reconocidos netos procedentes de las concesiones administrativas en el ámbito de la Administración Central del Estado ascendieron en 1990 a la cifra de 289 millones de pesetas. Dentro de esta figura jurídica las especialidades más frecuentes son las de carácter marítimo, terrestre, portuario, hidráulico, minero, forestal, aéreo y radioeléctrico.

La fiscalización de esta área se ha referido exclusivamente a la comprobación del control interno establecido, con carácter general, en los aspectos de coordinación, contabilidad presupuestaria e ingreso material en las Delegaciones de Hacienda.

Se constata también en la gestión de estos recursos, al igual que en la de los anteriores, la inexistencia de procedimientos uniformes y de instrucciones normalizadoras. Falta asimismo un sistema básico de información que contenga tanto los bienes públicos sujetos a concesión administrativa como los datos esenciales de las mismas. Se observa igualmente una inadecuada coordinación de los Centros Gestores con los contables y recaudadores, la omisión del contraído previo y la ausencia de actuaciones comprobatorias posteriores (art. 95.6.L.G.P), entre otras deficiencias.

Estas debilidades de control interno afectan a los derechos procedentes de las concesiones administrativas en mayor grado que al resto de los apartados reseñados en la presente fiscalización, debido a la dispersión de los Centros Gestores de los mismos. Ello es así por cuanto que las leyes especiales reguladoras de las concesiones administrativas otorgan la competencia para su autorización, seguimiento y control a los Departamentos Ministeriales y Organismos autónomos, sin que exista un órgano específico que unifique la información resultante de estos actos administrativos y controle el cumplimiento de las obligaciones

financieras impuestas en los mismos. La Dirección General de Patrimonio es competente para emitir informe sobre las condiciones generales, pero no ejerce atribución alguna en materia de gestión de los recursos correspondientes. Las Delegaciones de Hacienda e Intervenciones Territoriales se limitan a recibir y contabilizar los ingresos que se producen, en su mayor parte con ausencia de los datos de información más básicos. Este Tribunal no comparte la opinión manifestada en las alegaciones respecto a que el establecimiento de medidas de control precise de modificaciones normativas, dado que el marco legal en vigor es suficiente para ello. Por otro lado, la recomendación del Tribunal de reforzar el control y seguimiento de estos recursos no tiene por único ni principal destinatario la Dirección General de Patrimonio, sino que se dirige a los Centros gestores, contables y recaudadores, así como al órgano encargado del control interno de la Administración del Estado.*

III.3.- ANÁLISIS DEL SUBPROGRAMA 715.A.4 RELATIVO AL CONTROL Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE LA CEE AL ACEITE DE OLIVA

Las ayudas a la producción de aceite de oliva se tramitan a través de las Comunidades Autónomas. Estas gestionan su concesión, remitiendo posteriormente al SENPA, la relación de beneficiarios, con sus importes respectivos, para su pago.*

El importe total abonado por el SENPA en el ejercicio económico de 1990, por las ayudas a la producción, ha sido de 31.773 millones de pesetas. De ellos 15.151 millones corresponden a parte de las ayudas de la Campaña 1989/90 y el resto, es decir 16.622 millones, proceden de campañas anteriores.

A falta de datos definitivos, se ha estimado por el MAPA que el importe de las ayudas a la producción de aceite de oliva en la campaña 1989/90 supera los 25.000 millones de pesetas

El objetivo básico de la fiscalización ha consistido en analizar las actividades de control y actuaciones derivadas del mismo, realizadas por la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), en el marco de las ayudas que la CEE concede a la producción y el consumo de aceite de oliva, con cargo a los créditos del FEOGA-Garantía.

La ayuda comunitaria al consumo de aceite de oliva se concede en nuestro país a partir del 1 de diciembre de 1990 (Reglamento CEE 3488/90 de la Comisión). Durante el ejercicio fiscalizado no se tramitaron solicitudes de dichas ayudas, por lo que los análisis del Tribunal se han centrado en las ayudas a la producción.

El alcance se ha limitado al ejercicio económico de 1990; no obstante, en cuanto a los controles, el ámbito temporal se ha adaptado a la campaña olivarera 1989/90 que se inició el primero de noviembre de 1989 con una duración excepcional de trece meses (la ampliación se determinó en el Reglamento (CEE) 3445/90 del Consejo). La cuenta de gestión exigida por la Comisión de las Comunidades Europeas se refiere, por tanto, al citado período.

Los trabajos de fiscalización se han realizado en los dos centros de la Agencia en Madrid y en las sedes de cinco Organizaciones de Productores Reconocidas (OPR) y cuatro almazaras autorizadas de las provincias de Toledo y Córdoba.

Resultados de la fiscalización

Con independencia de que en cada uno de los epígrafes que vienen a continuación se realiza un análisis más pormenorizado, conviene resumir aquí los principales resultados obtenidos en esta fiscalización. En primer lugar, hay que señalar que ha existido un retraso considerable en la puesta en funcionamiento de la Agencia. Asimismo, el Consejo Asesor no se había constituido en marzo de 1990 y, por tanto, no sé han podido realizar las funciones consultivas que le asigna la normativa de su creación. Tampoco se han cubierto todos los puestos de trabajo aprobados. La dotación del grupo de inspectores, por su parte, se considera insuficiente.

La liquidación del presupuesto de la Agencia durante el ejercicio refleja adecuadamente la actividad económica y financiera a la que se refiere, de acuerdo con las normas que le son de aplicación.

El programa de las actividades de control para la campaña 1989/90 acusa la falta de medios humanos y materiales. Asimismo, es significativo, en dicho programa, la ausencia del fichero informatizado de datos oleícolas que los Estados miembros deben crear obligatoriamente.

El procedimiento de control de oleicultores establecido por la Agencia ha resultado suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos que le asigna la reglamentación comunitaria.

La Agencia no pudo obtener evidencia suficiente del cumplimiento de las obligaciones que incumben a las OPR, por las siguientes razones:

a) Ausencia de un Registro oleícola fiable.

b) Insuficiente desarrollo normativo de la obligación de realizar por las OPR los controles de compatibilidad y correspondencia.

c) Falta de normas precisas sobre la contabilidad de la actividad de gestión de las Organizaciones.

Respecto a los controles de las almazaras autorizadas se ha comprobado, asimismo, la existencia de deficiencias en el procedimiento que le impiden garantizar que la cantidad de aceite producido por la almazara no ha sido alterada.

III.3.1. ORGANISMO DE CONTROL.

III.3.1.1.- Competencias y estructura orgánica

El ejercicio del control de estas ayudas corresponde a la Agencia para el Aceite de Oliva, Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creado por la Ley 28/1987, de 11 de diciembre, con los fines y funciones establecidos en los Reglamentos (CEE) 2262/1984 del Consejo y 27/1985 de la Comisión.

De sus actividades, en relación con el control de las ayudas comunitarias, se destacan las siguientes:

- Verificar la exactitud de las declaraciones de cultivo de los oleicultores y el destino de las aceitunas recogidas para la producción de aceite.

- Comprobar la actividad de las OPR y de sus uniones, así como de las almazaras autorizadas.

- Investigar sobre el destino del aceite de oliva y de los subproductos obtenidos de la molturación.*

- Recoger, verificar y elaborar, a nivel nacional, los datos necesarios para el establecimiento de los rendimientos de aceituna y aceite por zonas de producción homogénea.

La estructura orgánica de la Agencia se aprobó por el Real Decreto 1065/1988, de 16 de septiembre, que establece los órganos superiores de la misma: el Director, como órgano directivo y de gestión, y el Consejo Asesor, como órgano consultivo a través del cual se articula la participación del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los sectores interesados en el seguimiento de la gestión de la Agencia. Además de la estructura administrativa adecuada para su funcionamiento, el Organismo presenta una estructura funcional que responde a las actividades de control que le encomienda el Reglamento (CEE) 2262/84.*

Del análisis de la normativa de creación, estructura y funcionamiento de la Agencia se ha comprobado el retraso producido en la puesta en funcionamiento de la Agencia. Habiendo sido creada por Ley en diciembre de 1987, figura por primera vez en los presupuestos de 1989 y al final de 1990 sólo estaban cubiertos, aproximadamente, el 50 % de los puestos de trabajo previstos. Asimismo, a la fecha de la fiscalización (marzo de 1992), aún no se había constituido el Consejo Asesor, por lo que no se han podido desarrollar las importantes funciones consultivas que le asigna la normativa de su creación.

Por otra parte, además de la falta de cobertura de los puestos de trabajo señalada anteriormente, la dotación del grupo de inspectores es insuficiente para cubrir, en los porcentajes señalados por la normativa -según se indica en el apartado 3.2.2.-, el elevado número de sujetos sobre los que realiza la Agencia los diferentes controles.

Por todo ello, se recomienda dotar al Organismo del número de funcionarios suficientes y debidamente preparados en las labores técnicas, fundamentalmente de inspección, para cumplir las tareas asignadas a la Agencia. Asimismo, es necesario constituir y poner en funcionamiento, en el menor plazo posible, el citado Consejo Asesor.

III.3.1.2.- Gestión presupuestaria y financiación

La gestión presupuestaria del Organismo está sometida, por un lado, a las normas de la Ley General Presupuestaria y, por otro, a los Reglamentos y normas comunitarias de aplicación en esta materia.

El ejercicio analizado corresponde al segundo año de funcionamiento presupuestario. Los créditos aprobados al Organismo por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 ascendieron a 592 millones de pesetas, de los que se reconocieron obligaciones por importe de 351 millones de pesetas (un 59 %).

Para la Campaña 1989/90 la Comisión de la CE aprobó a la AAO un presupuesto inicial de 730 millones de pesetas, comprometiéndose gastos de dicha campaña en 1990 por importe de 440 millones de pesetas (un 60 %).

Las diferencias existentes entre las cantidades computadas en ambos Presupuestos son debidas, fundamentalmente, a las siguientes causas:

a) El distinto período de tiempo a que se extiende el ejercicio presupuestario y la campaña oleícola 1989/90 (ésta se refiere a 13 meses, de los cuales 11 corresponden al ejercicio 1990).

b) La no coincidencia de las normas presupuestarias nacionales y comunitarias.

c) La potestad de decisión reservada a la Comisión de la CE sobre el importe de los gastos efectivos a financiar por el presupuesto comunitario. A título de ejemplo, se hace constar que en la fiscalización se ha comprobado que, siguiendo instrucciones de la Comisión, la liquidación del presupuesto de la campaña no incluye las obligaciones reconocidas por la Agencia por la compra, reforma y adecuación de su sede en Madrid y, en contrapartida añade, como gasto por arrendamiento, un coste estimado de alquiler.

d) La diferente clasificación económica de los gastos entre el presupuesto nacional y la cuenta de gestión comunitaria.

Respecto a la financiación, el artículo 1º del Reglamento (CEE) 2262/84 establece que el Presupuesto de las Comunidades Europeas financiará en la campaña 1989/90 la totalidad de los gastos de la Agencia. El análisis realizado sobre esta materia permite afirmar que los gastos de la Agencia, con los matices señalados anteriormente respecto a la inversión en su sede, han sido abonados en su totalidad por la Comunidad. Los ingresos, por su parte, han sido correctamente reflejados en la liquidación del presupuesto, correspondiendo la totalidad de los realizados en el ejercicio, excepto el reintegro de los anticipos concedidos al personal, a las transferencias procedentes de la CE.

III.3.2. ACTIVIDADES DE CONTROL.

Con carácter general, es competencia de las autoridades nacionales obtener garantías de la veracidad y regularidad de las operaciones financiadas por el FEOGA-Garantía, así como prevenir y perseguir las irregularidades cometidas y recuperar los importes indebidamente concedidos.

El examen del Tribunal se ha centrado en el cumplimiento de la normativa y en la eficacia de los procedimientos establecidos para realizar las actividades de control.

III.3.2.1.- Normativa de aplicación

La normativa nacional aplicable en el ejercicio está constituida por la Orden ministerial de 31 de julio de 1989, que regula la presentación de las declaraciones de cultivo, por la Orden ministerial de 21 de junio de 1990, que instrumenta la concesión de la ayuda a la producción para la Campaña 1989/90 y por la Resolución de la Agencia de 29 de diciembre de 1989, que establece la documentación e informes a facilitar por las OPR y sus uniones a efectos de controles. Ambas normas están basadas en los diferentes Reglamentos comunitarios de aplicación en la materia.

De acuerdo con esta normativa comunitaria, la Agencia tiene la obligación de comprobar sobre los sujetos sometidos a control:

a) La exactitud de las declaraciones de cultivo de los oleicultores y el efectivo destino de la aceituna recogida para la producción de aceite, comprobando sus datos sobre el terreno.

b) La actividad de las Organizaciones de Productores reconocidas y de sus Uniones y, en especial, las operaciones de control que realicen sobre sus asociados.

c) La actividad de las almazaras autorizadas, especialmente durante el período de molturación, y la contabilidad de existencias.

El cumplimiento de estas obligaciones requiere la realización de inspecciones a los sujetos señalados anteriormente; el resultado de las mismas se plasma en un acta de inspección que es firmada por ambas partes y en la que el sujeto controlado puede alegar cuanto estime oportuno. En el caso de detectar alguna irregularidad, ésta es comunicada a los órganos gestores (Comunidades Autónomas y SENPA), ya que la Agencia no dispone de competencia sancionadora.

III.3.2.2.- Programa de actividades

La normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a remitir a la Comisión un programa por campaña de las actividades de control a realizar por la Agencia, facultando a aquella para introducir en él cuantas modificaciones estime oportunas.

Asimismo, con la finalidad de permitir a los agentes de la Comisión el seguimiento de la actividad de la Agencia, debe remitirse a la Comisión, antes del 15 de cada mes, el programa de actividades de gestión y control previstas para el mes siguiente y, al final de cada trimestre, un resumen de las actividades realizadas.

El programa de inspección para la campaña 1989/90 se articula mediante tres proyectos cuyas previsiones y realizaciones figuran en el cuadro siguiente:

Programa	nº	INSPECCIONES		
		Previstas en Programa	Realizadas	% de ejecución
1. Oleicultores	428.000	1.600	1.582	99
2. OPR	,76	49	53	108
Uniones	1	1	1	100
3. Almazaras	2.100	150	178	119

La Agencia ha cumplido los plazos de presentación y las normas sobre el contenido de los diferentes programas de actividades (por campañas y mensuales) introduciendo en los mismos las modificaciones indicadas por la Comisión, habiéndose cumplido las previsiones. No obstante, se ha observado que en la inspección a oleicultores no asociados, el programa definitivamente aprobado recoge un número de inspecciones inferior al establecido en el Reglamento (CEE) 3061/84 (al menos un 5 %) y que la Agencia se ha ajustado en su actividad a este programa.

Dicho programa acusa la falta de medios humanos y materiales de la Agencia en su periodo inicial de funcionamiento, circunstancia que ha sido tenida en cuenta por las autoridades comunitarias en la aprobación del mismo.

Otra carencia significativa a destacar, consiste en la ausencia del fichero informatizado de datos oleícolas que obligatoriamente deben crear los Estados miembros según lo previsto en el Reglamento (CEE) 2261/84, cuyo plan de utilización debe figurar necesariamente en el programa de actividades. La Agencia debe, en el plazo más breve posible, contar con el citado fichero de datos, instrumento de apoyo necesario para planificar adecuadamente su actividad inspectora e integrar en el mismo los resultados del control.

III.3.2.3.- Control de oleicultores

Ante la falta de un registro oleícola, el censo de oleicultores se ha estimado por el MAPA, a partir de las declaraciones de cultivo de las campañas 1986/87 y 1987/88, en 428.000, con una superficie de olivar declarada de 1,8 millones de hectáreas, distribuidas en 34 provincias de 13 Comunidades Autónomas.

La Agencia ha inspeccionado a 1.582 oleicultores, levantando las actas correspondientes, de las que el 6,4 % han sido comprobadas por muestreo aleatorio en la fiscalización realizada por el Tribunal. El resultado de la misma permite obtener las siguientes conclusiones:

a) La carencia en la AAO del citado sistema informatizado de datos sobre el sector, ha obligado a sustituir unos criterios más rigurosos en la selección de la muestra por otros más operativos. Los 1.582 oleicultores fueron seleccionados en los municipios de mayor importancia olivarera y en función de datos catastrales y de la facilidad de acceso a la propiedad.

b) La revisión de expedientes practicada por el Tribunal en la Agencia ha permitido comprobar y estimar correctos los aspectos materiales registrados en las actas, por lo que no se ha considerado necesario realizar desplazamientos a las explotaciones. El examen se ha centrado, por tanto, en la verificación de si la acción inspectora de la Agencia abarcó todos los elementos de comprobación contenidos en las actas, si fue suficiente y si se utilizaron correctamente los datos para el cálculo de la ayuda. Cuando ha sido posible, se han cotejado estos datos con los archivados en la OPR donde estaba asociado el oleicultor y en la almazara que molturó su aceituna.

En general, puede afirmarse que el procedimiento establecido por la Agencia es adecuado y suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos de control de los oleicultores asignados por el art. 14 del Reglamento (CEE) 2261/84. No obstante, el examen ha puesto de manifiesto que, en circunstancias similares, las actas de inspección son cumplimentadas con criterios distintos para la determinación de la ayuda. Las diferencias encontradas, aunque numerosas son, sin embargo, poco significativas.

III.3.2.4.- Control de las Organizaciones de Productores Reconocidas (OPR) y sus Uniones

Al iniciarse la campaña 1989/90 se encontraban reconocidas 76 OPR, con 310.581 oleicultores asociados de 9 Comunidades Autónomas, de las que 11 estaban integradas en la única Unión existente. Durante la campaña fueron inspeccionadas por la Agencia 53 OPR (un 70 %), cuyo número de asociados era de 217.177 oleicultores, y la citada Unión.

La muestra fiscalizada por el Tribunal supone el 9,4 % del total de las Organizaciones inspeccionadas, representativas del 18,4 % de los oleicultores asociados a las mismas. En la sede de cada OPR se ha comprobado la realidad de los datos consignados en las actas y se ha analizado si el procedimiento establecido es suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones que la normativa comunitaria y nacional imponen a dichas Organizaciones. El resultado de la fiscalización es el siguiente:

a) La exigencia de acreditación de la condición de oleicultor para asociarse a una OPR presenta dificultades para su comprobación por la Agencia. Ello es debido a tres causas: la ausencia de un Registro oleícola fiable; el arraigo del contrato verbal en el medio rural y la falta de inscripción registral de los usos de la tierra.

b) En relación con la obligación de realizar por las OPR los controles de compatibilidad y correspondencia que establece el Reglamento (CEE) 2261/84, el insuficiente desarrollo de la normativa (Comunitaria y nacional) provoca la carencia de un procedimiento que garantice la efectiva realización por las OPR de los mencionados controles y es causa de importantes diferencias en su aplicación práctica, según la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicada la OPR. En las alegaciones se manifiesta que la Agencia efectuaba los controles, si bien algunos aspectos no estaban desarrollados de forma detallada en el expediente de inspección. No obstante, en la fiscalización realizada por el Tribunal se ha podido comprobar que en cuatro de las cinco OPR examinadas la Agencia no ha realizado procedimiento alguno para verificar el cumplimiento de la obligación de realizar los citados controles.*

c) La falta de normas sobre los libros en que ha de llevarse la contabilidad de la actividad de gestión de las Organizaciones, sobre los estados a confeccionar y sobre el cierre del ejercicio, ha provocado la existencia de registros y estados financieros diferentes en las entidades, dificultando con ello la implantación de un procedimiento operativo para la comprobación de su actividad económica. Se recomienda, por tanto, a la Agencia dictar las normas oportunas sobre estas materias para homogeneizar la presentación y garantía de la información contable.

d) No consta en la documentación incluida en los expedientes ninguna referencia a que se haya utilizado un procedimiento que permita comprobar la correspondencia entre el importe de la ayuda

por beneficiario y las transferencias ordenadas por las OPR, ni la confirmación con terceros -SENPA, bancos, etc- de los ingresos recibidos. En las alegaciones se manifiesta que en los informes de inspección de la Agencia se incluía el concepto "justificantes de las cantidades recibidas y el pago de los asociados" y que en la documentación se reflejaban algunos extremos de forma genérica sobre estos aspectos. Estas manifestaciones confirman lo señalado anteriormente, puesto que la comprobación de correspondencia entre el importe de la ayuda y la transferencia debe realizarse sobre cada ayuda.*

De todo ello se deduce que la Agencia no pudo obtener la evidencia suficiente del cumplimiento por las Organizaciones de las obligaciones que les incumben.

III.3.2.5.- Control de almazaras autorizadas

Las almazaras autorizadas a molturar la aceituna para la obtención del derecho a la percepción de la ayuda a la producción de aceite de oliva, durante la campaña 1989/90, fueron 2.100, distribuidas en 12 Comunidades Autónomas. De ellas, 178 (un 8,5 %) fueron inspeccionadas por la Agencia.

El procedimiento de inspección utilizado por la Agencia ha sido determinado de tal manera que se han efectuado tres visitas a cada almazara, coincidiendo una de ellas, al menos, con el periodo de trituración, al objeto de comprobar las instalaciones técnicas, su capacidad productiva y de almacenamiento, los rendimientos en aceite obtenidos y la verificación exhaustiva de la contabilidad de existencias.

La muestra elegida por el Tribunal para la fiscalización representa el 15,3 % de las almazaras inspeccionadas por el Organismo en las provincias de Córdoba y Toledo. De la fiscalización realizada se deducen los siguientes resultados:

a) Se han considerado correctos los informes que sobre el equipamiento técnico realiza la Agencia.

b) Dadas las lagunas normativas existentes en 1990, la Agencia no pudo desarrollar y aplicar el procedimiento adecuado para comprobar que la cantidad de aceite certificado por la almazara no superaba el producido, al no existir la obligación de guardar duplicados de los certificados y no estar constituida la base de datos del fichero informatizado.

c) Las comprobaciones efectuadas por la Agencia de la contabilidad de existencias presentan deficiencias ya que no consta la realización de pruebas de correspondencia entre los distintos registros contables de ésta ni de éstos con la contabilidad financiera así como con la documentación soporte de las operaciones de la almazara. A este respecto, en la fiscalización se han encontrado numerosas incidencias no registradas en las actas, entre las que se destaca la existencia de pequeñas diferencias en las cantidades de producto reflejadas en los libros (de recepción de aceituna, de fabricación y de salida de producto)

d) Al no quedar reflejado en los expedientes detalle alguno de la realización del aforo de los depósitos por los inspectores de la Agencia, el recuento físico de existencias ofrece pocas garantías.

En las alegaciones se ponen de manifiesto algunas explicaciones adicionales sobre la forma de realizar los aforos. Asimismo, se expone que las deficiencias en las tenedurías de los libros no justifican que la correspondencia entre los registros contables no sea verificada por los servicios de control de la Agencia. Ambas explicaciones no son contrarias a lo expresado en los anteriores puntos c) y d), sin que, por otra parte, exista constancia en los documentos examinados por el Tribunal de lo expuesto en las alegaciones. Por ello se mantiene la calificación del procedimiento como insuficiente.*

Las deficiencias del procedimiento señaladas anteriormente, permiten afirmar que éste resulta insuficiente para garantizar que la cantidad de aceite producida por la almazara no ha sido alterada y, en consecuencia, la cantidad de producto para el que se concede la ayuda tiene derecho a beneficiarse de la misma.

III.3.2.6.- Recomendaciones

En relación con las actividades de control, se recomienda la creación, en el menor plazo posible, del Registro oleícola, establecido por el Reglamento (CEE) 154/75 del Consejo, que permita disponer de la información adecuada sobre el cultivo del olivar (parcelas, número de propietarios, explotaciones, olivos, declaraciones, etc.) y que facilite las tareas de programación y ejecución de las actividades de control que tiene encomendadas por la normativa comunitaria la Agencia para el Aceite de Oliva.

Asimismo, la Agencia debe contar con el fichero informatizado de datos oleícolas.

Por otra parte, se recomienda a la Agencia dictar las normas adecuadas para homogeneizar la información contable de las OPR. Resulta imprescindible, por último, que en los procedimientos de control establecidos la Agencia proceda a la anotación exacta de los datos y documentos examinados; que realice las comprobaciones posteriores necesarias y que confirme los datos con terceros, para que las actas levantadas contengan la evidencia necesaria y suficiente para proporcionar una base razonable al dictamen de sus inspectores.

III.4.- FISCALIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA LA VIVIENDA Y ARQUITECTURA

III.4.1.- INTRODUCCIÓN

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los préstamos concedidos por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura (DGVA), durante el ejercicio 1990, con cargo al concepto presupuestario 821 "Préstamos a medio y largo plazo al Sector Público" del programa 431.A "Promoción, administración, ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda".

Los objetivos de la fiscalización han sido el análisis de los procedimientos de concesión, formalización y reintegro de los préstamos y el examen de la contabilización de tales operaciones.

Los créditos definitivos del citado concepto 821 han ascendido en 1990 a 10.488 millones de pesetas, con cargo a los cuales se han reconocido obligaciones por importe de 8.436 millones de pesetas, con el siguiente desglose:

- Préstamos a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para la promoción y rehabilitación de viviendas ..	707	millones de ptas.
- Apoyos financieros (viviendas sociales).....	3.168	" "
- Ayuda económica personal (viviendas de protección oficial).....	4.561	" "
TOTAL	8.436	millones de ptas.

En cuanto a la imputación presupuestaria de estas operaciones, cabe señalar que los beneficiarios finales de las dos últimas modalidades de préstamos indicados en el cuadro ("Apoyos financieros" y "Ayudas económicas personales") son personas físicas. Habría sido más adecuado, por lo tanto, presupuestar y contabilizar estos préstamos en el concepto 831, "Concesión de préstamos a medio y largo plazo fuera del sector público", de acuerdo con la clasificación económica del gasto contenida en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 13 de febrero de 1989, por la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 1990. Por otra parte, el balance del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo recoge dentro de la cuenta 2648, "Préstamos a medio y largo plazo a familias e instituciones sin fines de lucro", todas las operaciones imputadas al concepto presupuestario 821, cuando los préstamos a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales deberían haber sido computados en la cuenta 2544, "Préstamos a medio y largo plazo a Entes Territoriales", de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad de los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 31 de marzo de 1986.

III.4.2.- PRÉSTAMOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CORPORACIONES LOCALES

Como consecuencia del traspaso de competencias en materia de vivienda, la Administración del Estado aporta recursos financieros a las Comunidades Autónomas (CCAA) y a las Corporaciones Locales (CCLL) para la promoción y rehabilitación de viviendas. Estas aportaciones tienen la consideración de préstamos, reintegrables en 25 años y con un interés anual del 5%, que están regulados por convenios suscritos al amparo del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre. De acuerdo con dichos convenios, los préstamos son concedidos en unas ocasiones directamente a las CCLL, mientras que, en otras, éstas los reciben de la Administración del Estado a través de las CCAA.

Con anterioridad a la DGVA, que es el centro gestor desde 1986, dichos préstamos eran concedidos por el Instituto Nacional de la Vivienda, primero, y por el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, después. El importe nominal de los préstamos concedidos a los Entes locales por estos tres Organismos, desde 1977 hasta el 31 de diciembre de 1990, ascendió a 46.868 millones de pesetas, de los cuales 707 millones fueron otorgados en el ejercicio de 1990, como ya se ha indicado anteriormente.

Según los registros de la DGVA - que en abril de 1992 sólo estaban actualizados hasta julio de 1991 - las cuotas de amortización y los intereses vencidos por los citados préstamos ascendían, al 31 de diciembre de 1990, a 9.470 millones de pesetas. De ese importe, las CCAA y las CCLL sólo han pagado 898 millones de pesetas a la Dirección General. Ahora bien, esta última calcula la situación de la deuda a partir de la información suministrada por las CCAA y las CCLL. Las CCAA le proporcionan la fecha en que entregan a las CCLL los préstamos recibidos de la propia Dirección General, momento a partir del cual se devenga un interés hasta la entrega de las viviendas al beneficiario final. Las CCLL, por su parte, comunican a la DGVA la fecha de entrega de las viviendas, que es la que determina el comienzo del plazo de amortización del préstamo.

Los convenios de la Dirección General con las CCAA y las CCLL establecían el compromiso de estos Entes Territoriales de comunicar puntualmente los datos citados, pero este compromiso no está siendo cumplido. Ambas se retrasan habitualmente en la comunicación de los datos a la Dirección General, quien manifiesta que carece de competencias para poder exigir un mejor cumplimiento de las obligaciones por parte de las CCAA y las CCLL. La deuda de éstas al 31 de diciembre de 1990 puede ser, por lo tanto, superior a la cifra indicada con anterioridad; pero, en todo caso, es evidente que la inexistencia de un adecuado sistema de coordinación entre la Dirección General y los Entes Territoriales impide a aquella disponer de un adecuado procedimiento de control sobre la deuda real que se deriva de su actividad financiera como prestamista de dichos Entes.

Con los datos que le comunican las CCAA y las CCLL, la Dirección General calcula el importe del servicio de la deuda y procede a remitir a los Entes deudores los modelos de documento de ingreso en el Tesoro Público, para que procedan al mismo. A partir de este momento, la competencia para reclamar el ingreso en el Tesoro corresponde a los órganos de recaudación. La deuda pendiente ascendía a 8.572 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1990 y no consta que se haya alcanzado acuerdo alguno para su renegociación.

III.4.3.- APOYOS FINANCIEROS (VIVIENDAS SOCIALES)

Esta modalidad consiste en la concesión de ayudas reintegrables para facilitar el reembolso de determinados préstamos (llamados préstamos-base) que las personas físicas adquirentes de una vivienda social obtienen de entidades de crédito concertadas. Para recibir estos apoyos financieros, las personas físicas deben haber obtenido antes la calificación subjetiva correspondiente (en función de ciertas características, como el nivel de renta) al tiempo que la vivienda debe haber recibido también la calificación objetiva de vivienda social (en función de determinados requisitos, como la superficie y el precio).

En concreto, el Estado presta al titular el 26% del importe de cada cuota de intereses y amortización del préstamo-base. El beneficiario se compromete a su reintegro al Tesoro sin intereses, en un plazo que, sumado al de la amortización del préstamo- base, no puede ser superior a 20 años. Las cantidades prestadas por la DGVA como consecuencia de los apoyos financieros aprobados son entregadas directamente a la entidad financiera con la que se haya concertado el préstamo-base, la cual descuenta previamente al titular dichas cantidades del servicio de la deuda generado por el préstamo-base.

En 1990, la DGVA ha reconocido obligaciones derivadas de esta modalidad de ayuda por importe de 3.168 millones de pesetas, correspondiendo todas ellas a la campaña de promoción establecida y regulada por el Real Decreto-Ley 12/1976, de 30 de julio. Según manifiesta la Dirección General, las dificultades surgidas en la gestión de estos préstamos han sido la causa de que ninguna promoción posterior en materia de vivienda protegida haya recurrido de nuevo a este sistema de ayudas.

El 87% de las obligaciones reconocidas en 1990 (2.756 millones de pesetas) corresponde a apoyos financieros para el reembolso de préstamos-base concedidos por el Banco Hipotecario de España, mientras que el 13% restante (412 millones de pesetas) corresponde a los otorgados por bancos privados y cajas de ahorro.

El sistema de control interno de los apoyos financieros implantado por la DGVA difiere mucho del resto cuando la entidad financiera que concede el préstamo-base es el Banco Hipotecario de España. Cuando se trata de otra entidad, la Dirección General abre un expediente por cada apoyo financiero aprobado. En ellos deben figurar todos los documentos básicos para que ésta pueda comprobar el cumplimiento de las condiciones y requisitos que la normativa aplicable exige para la concesión de apoyos financieros. Por el contrario, en los apoyos financieros gestionados a través del Banco Hipotecario toda la documentación está depositada en el propio Banco.

En este último caso, además, los pagos de la DGVA al Banco se realizan sobre la base de unas liquidaciones que éste le remite periódicamente, en las que se relacionan todos los descuentos practicados al beneficiario final en el período correspondiente. Dado que la Dirección General no dispone de los expedientes con la documentación de cada apoyo financiero, no puede comprobar la exactitud y regularidad de la información que recibe del Banco Hipotecario. La DGVA considera implícitamente, por lo tanto, que dicha información es siempre veraz y exacta.

Para los casos de ayudas tramitadas a través de la banca privada y las cajas, la Dirección General efectúa un pago anual a cada entidad financiera, a partir de la información de que dispone en los expedientes sobre los calendarios previstos de amortización de los préstamos-base. No obstante, se ha podido comprobar que los pagos se efectúan con un año de retraso sobre el período al que corresponden. También se ha verificado que la DGVA no actualiza la información relativa a los calendarios de amortización de los préstamos-base con motivo, por ejemplo, de amortizaciones anticipadas por los beneficiarios, ya que las entidades financieras no le comunican estas incidencias. Debido a ello, en ocasiones se han pagado apoyos financieros por préstamos-base que ya estaban amortizados, lo que ha dado lugar a las correspondientes regularizaciones posteriores.

Del examen de una muestra representativa de los expedientes de apoyos financieros tramitados por medio de la banca privada se ha deducido la existencia de una serie de deficiencias, entre las que destacan las siguientes:

1º) Existen importantes deficiencias en el sistema de archivo implantado por la unidad de la DGVA encargada del depósito y custodia de los expedientes. Las notas negativas más relevantes, a estos efectos, son la carencia de un registro de entradas y salidas de los expedientes y la adjudicación de idénticos números o códigos de archivo a expedientes de apoyos financieros distintos.

2º) Los expedientes no recogen información sobre los pagos reales efectuados por la Dirección General en concepto de apoyo financiero. Ello obliga a combinar el examen de los registros auxiliares de contabilidad con la revisión de los expedientes, para poder disponer de toda la información relativa a cada apoyo financiero concreto.

3º) Se han detectado expedientes en los que falta cierta documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos al titular del préstamo o a la vivienda afectada, de lo que se deduce que no se han implantado unos procedimientos adecuados de control que aseguren el cumplimiento de las condiciones requeridas para el acceso a los apoyos financieros.

4º) Las entidades financieras no han remitido a la Dirección General la relación que, al comienzo de cada año, deben enviar sobre los préstamos-base que continúan vivos. Esta obligación figura en los convenios que regulan las relaciones entre las entidades financieras y la Dirección General y no consta que este centro haya requerido formalmente su cumplimiento.

Por otra parte, se ha revisado también una muestra representativa de los expedientes de ayudas tramitadas por medio del Banco Hipotecario. Como ya se ha señalado antes, dichos expedientes se hallan depositados en el Banco y no en la DGVA. Las irregularidades y deficiencias más relevantes que se han detectado son las siguientes:

1º) Los beneficiarios de algunos apoyos financieros son cooperativas, cuando la normativa aplicable restringe la condición de titular de los mismos a las personas físicas. Como consecuencia de este hecho, se incumplen asimismo otros dos requisitos que, de acuerdo con la normativa, deben constar en el expediente: el disfrute por el titular de la vivienda de la calificación subjetiva y la formalización de la compraventa en escritura pública. Según la información suministrada al Tribunal por el Banco Hipotecario, durante 1990 se han pagado apoyos financieros cuyos titulares eran cooperativas por un importe que asciende, al menos, a 95 millones de pesetas, correspondientes a 729 préstamos-base.

2º) El Banco Hipotecario no dispone de expedientes individualizados por apoyo financiero sino que agrupa en uno solo todos los correspondientes a cada promotor de la construcción y venta de las viviendas. Esto dificulta el control individual de cada apoyo financiero.

3º) Por la documentación que consta en los expedientes se puede deducir que el Banco Hipotecario no ha implantado unos procedimientos adecuados de control que aseguren el cumplimiento de todos los requisitos para acceder a los apoyos financieros. A título de ejemplo, cabe señalar la irregularidad que supone el que una misma persona física haya percibido del Banco Hipotecario once préstamos-base diferentes, acompañados de los once apoyos financieros correspondientes, cuando a cada persona física sólo puede concederse un apoyo, como consecuencia del carácter no repetible de la calificación subjetiva, requisito imprescindible para la aprobación de la ayuda.

III.4.4.- AYUDAS ECONÓMICAS PERSONALES (VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL)

Las ayudas económicas personales constituyen una modalidad de actuación financiera en el campo de las viviendas de protección oficial. Están reguladas por el Real Decreto-Ley 31/1978 y, en síntesis, conservan las características principales del sistema de apoyos financieros analizados en el apartado anterior. En efecto, al igual que aquellos, éstos consisten en préstamos sin interés que la DGVA concede a adquirentes de una vivienda (en este caso, de viviendas calificadas como de protección oficial) para facilitar el pago del servicio de la deuda de los préstamos-base que hayan recibido de entidades financieras concertadas. Ahora bien, a diferencia de los apoyos financieros, las ayudas económicas personales financian exclusivamente una parte de los intereses de los préstamos-base, sin cubrir parte de las amortizaciones. El porcentaje financiado de intereses varía según las diversas modalidades reguladas por diferentes Órdenes ministeriales.

Las obligaciones reconocidas en 1990 por la DGVA por este tipo de ayudas ascendieron a 4.561 millones de pesetas. Un total de 3.930 millones de pesetas correspondieron a pagos efectuados a través del Banco Hipotecario, por ser la entidad financiera de los préstamos-base correspondientes. El resto fue tramitado a través de la banca privada y las cajas de ahorro.

Todos los expedientes de las ayudas económicas personales se encuentran archivados en la Dirección General. De la revisión de una muestra representativa de los mismos se han obtenido las siguientes conclusiones:

1º) Por la documentación que consta en los expedientes se puede deducir que no se han implantado unos procedimientos adecuados de control que aseguren el cumplimiento de todos los requisitos exigidos a quienes deseen acceder a las ayudas económicas personales. En este sentido, se han observado diversas deficiencias formales en la documentación justificativa que debería acreditar el cumplimiento de los citados requisitos. Las alegaciones a este punto describen la documentación que se exige se incluya en los expedientes, pero no desvirtúan las observaciones señaladas.*

2º) Existen importantes demoras en la tramitación de estas modalidades de ayuda. En los expedientes examinados se ha observado que transcurre un plazo medio de 17 meses entre la resolución por la que se reconoce el derecho a la ayuda y la aprobación del gasto correspondiente.

3º) La DGVA no ha dispuesto de mecanismos eficaces de coordinación con las entidades financieras concedentes de los préstamos-base. Como consecuencia de ello, la Dirección General carece de una información que resulta imprescindible para efectuar un adecuado control y seguimiento de las ayudas económicas personales. En concreto, no constan en los expedientes, frente a lo expuesto en

las alegaciones, las fechas de inicio y finalización previstas para la amortización del préstamo-base; información que no ha sido solicitada por la Dirección General a las entidades financieras.

Dado que el comienzo del reintegro de la ayuda económica personal coincide con la finalización del reembolso del préstamo-base, el desconocimiento de esta última circunstancia provoca que la Dirección General no disponga de información sobre el momento en que debe comenzar a requerir el reintegro de la ayuda económica personal. La Dirección General argumenta que, en la mayor parte de los casos, los préstamos-base tienen un plazo de amortización de 12 años, por lo que en el ejercicio de 1990 no debería haber comenzado todavía el reintegro de ayudas económicas personales en cuantía significativa. Sin embargo, de haber existido algún caso en el que el beneficiario hubiera concertado un plazo de amortización del préstamo-base inferior a 12 años, no sólo se habría incumplido lo previsto en la legislación, sino que la Dirección General no lo habría conocido y, por lo tanto, no habría podido iniciar los requerimientos de reintegro de la ayuda económica personal en el momento adecuado. Al no constar en los expedientes la fecha de finalización de la amortización del préstamo-base, este Tribunal no ha podido confirmar la existencia de algún supuesto como el señalado.*

Por todo ello, la DGVA, como órgano gestor de las ayudas y encargado de su control en cumplimiento de la normativa aplicable, está obligada a solicitar a las entidades financieras correspondientes la fecha de cancelación de los préstamos-base que éstas últimas hubieran concedido, a efectos de poder proceder, en tiempo oportuno, a la reclamación de las ayudas económicas personales. Este proceso de requerimiento de información puede ser extremadamente complicado, dado el elevado volumen de ayudas tramitadas, pero resulta ineludible.*

III.5.- ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE EFICACIA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

III.5.1.- INTRODUCCIÓN

Los objetivos del programa 521 A, "Ordenación y explotación de los servicios de comunicaciones, postales y telegráficos", perseguían lo siguiente: la mejora de la calidad de los servicios postales, telegráficos y financieros -giro postal-; la implantación y posterior potenciación de servicios especiales; la mejora de la productividad de los recursos humanos y la implantación de infraestructuras adecuadas en todo el territorio nacional. Dicho programa ha sido gestionado íntegramente por la Dirección General de Correos y Telégrafos[9]

El objeto de esta fiscalización ha sido analizar los sistemas creados por el centro gestor para determinar el grado de cumplimiento de dichos objetivos. Más concretamente, el análisis se ha centrado en los sistemas establecidos para la medición de los niveles de realización de los indicadores asociados a los objetivos 1 y 2 del programa presupuestario, referidos respectivamente a la mejora de la calidad de los servicios postales y de los telegráficos y financieros.

III.5.2.- INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SISTEMAS DE SEGUIMIENTO

Los objetivos 1 y 2 del programa presupuestario y sus respectivos indicadores para 1990, tal como constan en la Memoria correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio, son los siguientes:

1.- Mejora de la calidad de los servicios postales en el intervalo admisión/entrega (con el grado previsto de realización que se indica):[10]

1.1 Correo urbano en D+1 ..... 90 %

1.2 Correo urbano en D+2 ..... 98 %

1.3 Correo regional en D+2 ..... 92 %

1.4 Correo regional en D+3 ..... 98 %

1.5 Correo nacional en D+3 ..... 95 %

1.6 Correo nacional en D+4 ..... 97 %

1.7 Correo nacional en D+5 ..... 99 %

1.8 Plazo medio de entrega ..... 2.08 días

1.9 Correo de primera categoría en D+2 ..... 90 %

1.10 Correo de segunda categoría en D+3 ..... 70 %

1.11 Correo expres y urgente en D+1 ..... 100 %

1.12 Entrega de servicio telegráfico en 1 hora ..... 80 %

2.- Mejora de la calidad de los servicios telegráficos y financieros.

2.1 Entrega de un telegrama (urgente) en 1 hora ..... 80 %

2.2 Entrega de un telegrama (ordinario) en 6 horas ..... 81 %

2.3 Plazo medio de entrega de un giro ordinario ..... 1.5 días

Las categorías "correo urbano" y "correo nacional", hacen referencia al correo recogido y entregado respectivamente en el mismo municipio y entre dos puntos cualesquiera del territorio nacional pertenecientes a diferentes "zonas", clasificación postal que se corresponde, con ligeras excepciones, con el territorio de una Comunidad Autónoma. La categoría "correo regional" se corresponde con el correo recogido y entregado entre localidades que forman parte de una "zona".

Por correo de primera categoría se entiende el ligado al reparto de cartas y tarjetas postales -la denominada línea básica de correos-; en la segunda categoría se encuadran los impresos -la denominada línea económica de correos-.

Previamente al análisis de los sistemas de seguimiento implantados por el centro gestor durante 1990, cabe hacer dos consideraciones. La primera, que los indicadores definidos hacen únicamente referencia a plazos internos del centro gestor y son, por lo tanto, incompletos. En efecto, la comparación entre las fechas de entrada del correo en una oficina postal y su entrega al repartidor, siendo importantes en sí mismas, no dan una imagen global de la calidad del servicio ofrecido a los particulares por la Dirección General, que se mediría mejor poniendo en relación las fechas de envío y recepción por los usuarios de los diferentes objetos postales.

En segundo lugar, y según se ha podido comprobar analizando las Memorias de este programa presupuestario, no ha existido continuidad en el establecimiento anual de los indicadores. Estos han cambiado en los diferentes ejercicios, por lo que no resulta posible efectuar un seguimiento plurianual de su grado de realización. Ello impide obtener una visión general de los avances o retrocesos en el logro de objetivos, medidos en relación a indicadores estables. En este sentido, es destacable el hecho de que en el ejercicio de 1991 desaparecieron, precisamente, los únicos indicadores del objetivo 1 para los que, según se verá más adelante, la Dirección General disponía de sistemas de seguimiento. Los indicadores del objetivo 2 desaparecieron también en 1991, como consecuencia lógica de la desaparición del mismo en ese ejercicio.

El Tribunal ha solicitado al centro gestor información y documentación sobre los valores de realización registrados en 1990 por los indicadores de los objetivos 1 y 2, así como sobre los sistemas de cálculo y medición de dichos valores. De la contestación recibida se deduce que no se efectúa seguimiento específico de los indicadores 1.1 a 1.7 ni del 2.3.

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, en la Memoria del programa correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1992 se presentan unos valores de realización de los indicadores de 1990, que coinciden exactamente con lo programado. Dichas cifras, sin embargo, carecen de fiabilidad alguna, al no constar, como ya se ha expuesto, que haya existido un procedimiento que permitiera calcular el valor realmente alcanzado por ninguno de los indicadores.

III.5.3.- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL CORREO DE CARTAS E IMPRESOS

La Dirección General de Correos y Telégrafos dispone de un sistema denominado "Control de calidad de cartas e impresos y análisis de colas", mediante el cual pueden obtenerse los valores de realización de los indicadores 1.8, 1.9 y 1.10. Las unidades responsables de estos controles fueron la Subdirección General de Explotación, hasta mayo de 1990, y la Inspección General de Correos y Telégrafos, a partir de dicha fecha.

Cabe señalar, en primer lugar, que, desde el punto de vista del control interno, constituye un acierto la asunción de estas competencias por la Inspección General, pues no respondía al principio de separación de funciones la acumulación en la misma unidad de las labores de explotación del correo y control de calidad.

El sistema de control consiste, en síntesis, en la selección de una muestra de cartas e impresos en cada Jefatura Provincial de Correos y la verificación del número de días transcurridos entre las fechas de matasellado y de reparto.

Las instrucciones para la realización de dicho control se encuentran recogidas y normalizadas en un manual de procedimiento que recoge instrucciones, entre otros aspectos, sobre la recogida y envío de datos, el tamaño de la muestra por provincias, el calendario de realización de los controles, el modelo de informe y el manejo de la aplicación informática para el tratamiento de los datos.

El examen de dicho manual ha puesto de manifiesto que dichas instrucciones, y principalmente las que se refieren a las tareas de recogida de la muestra, están definidas de manera demasiado genérica. Ello permite un cierto grado de improvisación en la ejecución de las mismas y, en consecuencia, la posible aparición de datos sesgados, como se puso de manifiesto en la práctica, según se detallará más adelante. Por otro lado, en el citado manual no se hace referencia a la identificación de las personas que deben realizar la elección de la muestra, lo que origina prácticas muy diferentes en las distintas Jefaturas.

[9] En la actualidad Organismo autónomo comercial, en cumplimiento de las previsiones del art. 99 de la Ley 31/90, por la que se aprobaron los presupuestos para el ejercicio económico de 1991.

[10] La expresión D+n significa la entrega al repartidor postal del correo dentro, como máximo, de los n días siguientes al de su entrada en una oficina postal. De esta manera, un indicador como el 1.1 representa que el objetivo parcial que se desea cumplir es entregar al repartidor el 90% del correo urbano que ha entrado el día anterior en una oficina postal.

No se ha obtenido por este Tribunal la documentación ni los antecedentes utilizados para el establecimiento y definición del diseño de las muestras a seleccionar para los controles de calidad. Ni la Subdirección General de Explotación ni la Inspección General, unidades que estuvieron encargadas en 1990 de los controles efectuados, han facilitado la información requerida.

Una de las pruebas realizadas consistió en la asistencia a un control en la Jefatura Provincial de Madrid, del que cabe efectuar las siguientes observaciones:

1.- En las hojas de control por distrito utilizadas para el muestreo no se hace constar la fecha de matasellado de las cartas e impresos seleccionados, sino el número de días transcurridos desde la entrada del objeto en la oficina hasta la entrega al repartidor postal. En este procedimiento, el Tribunal ha detectado errores en el cálculo de la duración del periodo citado. Por otra parte, las hojas de control son destruidas después de ser refundidas en los documentos finales de control de cada Jefatura Provincial, impidiendo una eventual revisión posterior de este proceso de integración.

2.- No existe un conocimiento suficiente de las instrucciones del manual por parte de las personas que deben ejecutarlas, lo que origina que se produzcan incumplimientos de aquellas. A título de ejemplo, en el control presenciado se detectó que, para el cálculo de los días transcurridos entre el matasellado y el reparto, se descontó el domingo, contraviniendo lo establecido en el manual.

3.- De la comprobación aritmética de los objetos postales elegidos por muestreo, se deduce que el tamaño de las muestras es inferior al recomendado por el manual de procedimientos. Por otra parte, la formalización de las hojas de control no es rigurosa, habiéndose detectado datos tachados y manipulados.

4.- La teórica segregación de funciones entre la Subdirección General de Explotación y la Inspección General, producida en mayo de 1990, se ve debilitada en la práctica por el hecho de que las tareas de recogida de los objetos de la muestra son realizadas por los Subinspectores de reparto que, aunque adscritos orgánicamente a la Inspección General, se integran funcionalmente en las oficinas de explotación.

Como consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal debe manifestar sus reservas acerca de la fiabilidad de los resultados obtenidos con los controles realizados.

A pesar de ello, si se calculase la media de los valores de realización que figuran en los informes mensuales de la Inspección General correspondientes a 1990, se obtendrían los resultados que se detallan a continuación:

1.8.- Plazo medio de entrega
  a) Correo de primera categoría..... 2,14 días
  b) Correo de segunda categoría..... 2,67 días
1.9.- Correo de primera categoría en D+2..... 83,50 %
1.10.- Correo de segunda categoría en D+3..... 67,20 %

Aunque el indicador 1.8, plazo medio de entrega, hacía referencia tanto al correo de primera como de segunda categoría, de los datos facilitados por la Inspección General no ha sido posible efectuar la media ponderada para ambos tipos de correo. Ésta, en cualquier caso, al igual que los otros dos valores citados, refleja una peor calidad de servicio que lo previsto en los indicadores, cuyos valores se habían fijado en 2,08 días, un 90% y un 70% respectivamente, como se indicaba en el punto III.5.2.

Los indicadores 1.8 a 1.10 no figuran en la Memoria presupuestaria del ejercicio de 1991.

III.5.4.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS TELEGRAFICOS

El seguimiento de los servicios telegráficos se efectúa mediante el indicador 1.12 "Entrega de servicio telegráfico en 1 hora" del Objetivo 1, que es idéntico al 2.1 "Entrega de un telegrama en 1 hora" del Objetivo 2, así como por el indicador 2.2 "Entrega de un telegrama en 6 horas" del Objetivo 2. Los telegramas asociados a los indicadores 1.12 y 2.1 son los considerados urgentes, mientras que los asociados al indicador 2.2 son los considerados ordinarios.

Como se recoge en el cuadro del apartado III.5.2, el objetivo del centro gestor era hacer llegar a los destinatarios el 80% de los telegramas urgentes en menos de 1 hora y el 81% de los ordinarios en menos de 6.

Los controles de calidad son realizados por los Servicios Telegráficos dependientes de la Subdirección General de Explotación. De la documentación aportada por los responsables de los Servicios y del conjunto del trabajo fiscalizador merece destacarse:

1.- La inexistencia de un manual de procedimiento donde se incluyan las instrucciones para llevar a efecto los controles; dicha ausencia es suplida parcialmente por Circulares internas de la propia Subdirección General de Explotación que, en cualquier caso, no son cumplidas estrictamente en el proceso de control.

2.- Al contrario de lo que ocurre en el control del correo de cartas e impresos, la toma de datos de los tiempos de admisión y entrega es realizada por personal de la propia oficina controlada.

No existe, por tanto, la segregación de funciones que sería necesaria para garantizar la independencia del control.

3.- Los datos son refundidos por los Servicios Telegráficos en un formato diseñado por la Inspección General de Correos y Telégrafos sin ayuda de material informático, lo que incrementa el riesgo de errores.

A la vista de todo ello, el Tribunal manifiesta serias reservas acerca de la fiabilidad de los resultados obtenidos con los controles realizados.

Pese a ello, calculando la media de los datos mensuales suministrados por la Subdirección General de Explotación para 1990, se obtienen unos porcentajes que reflejan unos resultados satisfactorios para los telegramas ordinarios -un 89% de los cuales es entregado en las 6 primeras horas, frente al 81% previsto-. Por el contrario, los resultados son especialmente insatisfactorios para los telegramas urgentes ya que sólo un 15% de los mismos es entregado en la primera hora, frente al 80% previsto.

Como ya se señaló anteriormente, ningún indicador ligado al sistema de seguimiento de los servicios telegráficos figura en la Memoria presupuestaria para el ejercicio de 1991.

III.5.5.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL EXPRES

El servicio "Postal Expres" -de ámbito nacional- se creó con la intención de ofrecer una prestación especial de alta calidad y seguridad para hacer llegar documentos, objetos y mercancías a cualquier ciudad del territorio nacional incluida en la red, en un plazo de 24 horas. El mismo se extiende a 79 oficinas postales -52 Jefaturas Provinciales y 27 Administraciones ubicadas en localidades consideradas importantes-.

El seguimiento de dicho servicio se efectúa mediante el indicador 1.11, para el que se marca el objetivo parcial de realizar el denominado "plazo de encaminamiento" en un máximo de 24 horas para la totalidad de los objetos enviados a través del mismo. Se entiende por "plazo de encaminamiento" el número de días transcurridos entre el depósito de los envíos en la oficina de origen y su distribución por la oficina de destino.

El control de calidad del producto se inició en julio de 1990 por la Inspección General de Correos y Telégrafos y va dirigido a medir el "plazo de encaminamiento". Los controles efectuados durante 1990 -cuatro en total-, tuvieron un carácter experimental, no contándose con un manual de procedimientos que incluyera las instrucciones para efectuar los controles hasta agosto de 1991.

El trabajo de fiscalización se ha limitado al examen de los informes elaborados durante el ejercicio económico de 1990, así como al estudio de la evolución del "plazo de encaminamiento", sobre la base de los datos obtenidos de dichos informes.

Del estudio realizado merece destacarse que:

1.- Los tamaños de las muestras son excesivamente pequeños, lo que disminuye la fiabilidad del control.

2.- La elección de las muestras entre las diferentes oficinas se realiza en función de los medios humanos disponibles en cada una para llevar a cabo los controles. Ello impide la realización de controles homogéneos en las diferentes oficinas.

3.- Durante 1990 no existió ningún calendario de realización de los controles. En el ejercicio de 1990 se realizaron solamente cuatro informes -en los meses de julio, septiembre, noviembre y diciembre-, pero en dos de ellos no se incluyeron formalmente los análisis de los datos recogidos.

4.- El tratamiento de la información se realiza de forma manual. Al no estar mecanizadas las tareas de obtención de resultados, se incrementa el riesgo de errores.

5.- En parte debido a lo anterior, se producen grandes retrasos en el análisis de los resultados.

En consecuencia, el Tribunal debe manifestar de nuevo sus reservas sobre la fiabilidad de los resultados obtenidos a partir de los controles citados.

En los informes de control de calidad del ejercicio de 1990 efectuados por la Inspección General se recogen los cálculos relativos a los productos entregados en las 24 horas siguientes a su envío, junto con los correspondientes a las entregas en fechas posteriores. A partir de estos datos se obtuvieron los siguientes resultados:

	D+0	D+1	D+2	D+3
JULIO	0	71	86,9	97,6
SEPTIEMBRE	1,1	67,8	93,5	99,4
NOVIEMBRE	0	63,9	91,2	99,0
DICIEMBRE	0	61,3	90,5	98,2

Como se puede observar, la calidad del producto ha descendido a lo largo de 1990. El nivel de realización en D+1, cifrado en el 100% según el objetivo parcial, alcanza escasamente el 66% en media anual después de descender de manera progresiva a lo largo del año.

A ello deben añadirse las deficiencias de los controles ya reseñadas, para completar la imagen global sobre la calidad del servicio rendido.

Como se señaló anteriormente, el indicador ligado al sistema de seguimiento del servicio postal expres no figura en la Memoria Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico de 1991.

III.6.- ANÁLISIS DEL PROGRAMA 724B "APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA".

El objetivo de la fiscalización ha sido el análisis del programa 724B "Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial", que tiene por finalidad mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas industriales (PYME). Para ello, este programa tiene como objetivo primordial crear un marco general o conjunto de condiciones que faciliten el desenvolvimiento de las PYME y redunden, en último extremo, en una mejora de su competitividad y de su capacidad de generación de empleo y riqueza.

El alcance se ha limitado al ejercicio económico de 1990; no obstante, el ámbito temporal se ha ampliado en aquellos aspectos que se han considerado clarificadores.

Los trabajos de fiscalización se han realizado en los tres órganos encargados de la ejecución del programa: la Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnológica (SGPIT), a quien corresponden también las funciones de dirección y control; la Dirección General de Industria (DGI) y el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI), organismo autónomo de carácter administrativo. En el ejercicio de 1990 los tres eran Centros directivos dependientes del Ministerio de Industria y Energía (MINER). También se han realizado trabajos de fiscalización en el Centro de Diseño y Moda (CDM), a quien la SGPIT encomendó parte de la tramitación de determinadas subvenciones del programa.

Resultados de la fiscalización

Con independencia de que en cada uno de los apartados siguientes se realice un análisis más pormenorizado, conviene resumir aquí los principales resultados obtenidos en esta fiscalización. En primer lugar, hay que señalar que existe una falta de adecuación entre los objetivos e indicadores y la realidad del programa, lo que impide un análisis de la ejecución presupuestaria en términos de eficacia.

Por otro lado, no se han efectuado autorizaciones ni disposiciones de crédito en el subprograma 4, gestionado por la DGI y destinado a subvencionar la modernización industrial del sector textil-piel. Esto puede atribuirse al largo proceso de negociación y a las discrepancias existentes entre las autoridades nacionales y la Comisión de las Comunidades Europeas.

En cuanto a la gestión del IMPI se ha observado:

a) La falta de adaptación de su normativa al nuevo marco de actuación y la existencia de determinadas deficiencias en la presupuestación y aplicación de los gastos correspondientes al capítulo 6º "Inversiones reales".

b) Respecto a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), hay que señalar que el IMPI -que asumió el papel de socio protector e impulsor- debería haber finalizado al 31 de diciembre de 1991 su participación en dichas sociedades. A esa fecha sólo se encontraban pendientes de desinversión 2 de las 24 SGR. El importe obtenido de la venta representa el 18 % del valor nominal de las acciones, con una pérdida de 1.971 millones de pesetas. En 1990 el apoyo a dicho Sistema de garantías recíprocas lo realizó el IMPI a través de la sociedad de reafianzamiento, SOGASA.

Por último, existe confusionismo y cierta rigidez en el procedimiento para conceder las subvenciones del subprograma 2, gestionado por la SGPIT, al existir una doble normativa de aplicación. Asimismo, se han detectado determinadas deficiencias en la tramitación de los expedientes objeto de subvención.

III.6.1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La memoria de objetivos del programa, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 1990, contiene deficiencias importantes. En efecto, en dicha memoria sólo se definen 3 de los 4 subprogramas, con sus actividades, y 13 objetivos, con sus correspondientes indicadores de seguimiento. Nada se dice, sin embargo, del subprograma a gestionar por la DGI. Por esta razón, la memoria no recoge los objetivos a conseguir por esta Dirección General ni las previsiones de las actividades a realizar por la misma. Asimismo, el texto de esta memoria es confuso, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el anteproyecto presentado por los órganos ejecutores. Esta confusión es mayor por las discrepancias existentes entre ambos documentos en la asignación de objetivos a los diferentes subprogramas.

La ausencia de elementos importantes en la memoria ha obligado al Tribunal a centrarse en los anteproyectos de presupuesto presentados por los tres centros gestores que, en conjunto, dividen el programa en 4 subprogramas y 16 objetivos y cuya finalidad, sectores afectados, presupuesto y ejecución se relacionan en el cuadro 1.

CUADRO 1

(en millones de pesetas y porcentajes)

SUBPROGRAMAS	Nº OBJETIVOS	CENTRO GESTOR	SECTORES	PRESUPUESTO		
				TOTAL	Obl. Rec.	Grado Ejec.
1 Horizontal	10	IMPI	Todos	1.916	1.760	92 %
2 Competitividad	1	SGPIT	Textil, calzado, mobiliario y otros (PLAN)	890	875	98 %
3 Artesanía	3	SGPIT	Artesano	140	46	33 %
4 Relanzamiento industrial textil-piel	2	DGI	Textil-piel zonas "objetivo 1"	500	-	-
	16			3.446	2.681	78 %

La finalidad de cada subprograma es, respectivamente:

1.- Facilitar a las PYME la resolución de una serie de problemas comunes: entre otros, información, financiación y cooperación empresarial.

2.- Aumentar la competitividad de las PYME que operan en sectores de actividad en que los componentes de calidad y diseño son factores determinantes en su grado de competitividad.

3.- Elevar los niveles de información y formación empresarial del artesanado, mejorar la comercialización de sus productos, y otros.

4.- Aumentar la dimensión patrimonial de las empresas e incorporar nuevas tecnologías.

Del resultado de la fiscalización se deduce que existe una falta de adecuación de los objetivos e indicadores a la realidad del programa. Estas condiciones han impedido un análisis de la ejecución presupuestaria en términos de eficacia, fundamentalmente por las siguientes razones:

a) Los diez objetivos e indicadores del subprograma 1, gestionado por el IMPI, no son en general representativos de la actividad realizada por el Organismo , ni se efectúa un seguimiento sistematizado de los indicadores establecidos para la medición del cumplimiento de objetivos. Además, el IMPI, con independencia del programa presupuestario, elabora un "Programa operativo anual", donde se definen los "programas" (actividades) a realizar y se valoran sus gastos. Puede afirmarse, sin embargo, que no existe concordancia, en términos generales, entre ambos programas.

b) Los cuatro objetivos de los subprogramas 2 y 3 gestionados por la SGPIT coinciden con los conceptos presupuestarios y los indicadores se refieren a la ejecución del presupuesto de gastos, lo que no puede calificarse de presupuestación por objetivos.

c) En cuanto a los dos objetivos del subprograma 4, gestionado por la DGI, se desconoce su grado de representatividad. Este subprograma no se ha ejecutado en el ejercicio 1990.

Por todo ello, resulta preciso realizar la presupuestación por objetivos de tal manera que éstos se definan previamente de acuerdo con la finalidad del programa. La presupuestación debe permitir, asimismo, la asignación de los recursos con criterios de racionalidad y eficacia y establecer los indicadores adecuados para evaluar el grado de cumplimiento de dichos objetivos.

III.6.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los Presupuestos Generales del Estado para 1990 asignan a este programa recursos por importe de 3.446 millones de pesetas.

Según puede observarse en el cuadro 1, las obligaciones reconocidas alcanzaron en el ejercicio un importe de 2.681 millones de pesetas. Esta cifra refleja un bajo grado de ejecución (del 78%) que fue debido, fundamentalmente, a la falta de reconocimiento de obligaciones del subprograma 4, por los motivos que se exponen más adelante. Como consecuencia de la mejora en la ejecución de los subprogramas 1 y 2, el importe de las obligaciones de 1990 representa un incremento del 29 % en relación a la cifra de 1989.

La distribución económica más significativa de las obligaciones reconocidas, es la siguiente:

a) El 45 % de las mismas, es decir 1.195 millones de pesetas, corresponde al capítulo 7º "Transferencias de capital" y se ha dirigido a:

- Entidades sin fines de lucro, para la subvención de actividades acogidas al Plan de promoción de diseño, calidad y moda para la pequeña y mediana empresa manufacturera, por importe de 875 millones de pesetas (Subprograma 2).

- Empresas privadas, para apoyo financiero a las PYME, 170 millones de pesetas. (Subprograma 1).

- Comunidades Autónomas, para la realización de diversos proyectos relacionados con las PYME, 150 millones de pesetas. (Subprograma 1).

b) El 21 % de dichas obligaciones, (573 millones de pesetas) corresponde al capítulo 8º "Activos financieros", habiéndose destinado la práctica totalidad (572 millones) a la adquisición de acciones por el IMPI. (Subprograma 1).

c) El 16 %, por importe de 443 millones de pesetas, se ha destinado al capítulo 6º "Inversiones reales". De esa cantidad, el IMPI ha ejecutado 414 millones de pesetas en el Subprograma 1 y, el resto, 29 millones de pesetas, ha sido ejecutado por la SGPIT en el Subprograma 3.

III.6.3.- GESTIÓN DEL PROGRAMA

De la fiscalización realizada en los Centros directivos, en relación a la gestión del programa, las principales observaciones a realizar son:

III.6.3.1.- Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Industrial

El análisis efectuado sobre la normativa del IMPI permite afirmar que ésta no se ha adaptado al nuevo marco de actuación derivado tanto del traspaso de competencias en estas materias a las Comunidades Autónomas como de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, ya que su Reglamento Orgánico, aprobado por el Real Decreto 1114/1978, no ha experimentado modificaciones desde

1982. Ello ha impedido la readaptación de los vocales del Consejo de Dirección, órgano supremo de gobierno del Organismo. Como consecuencia, el Consejo no se ha reunido desde dicho año 1982, aunque reglamentariamente debía hacerlo, al menos, dos veces al año.

En cuanto a las funciones asignadas a la Comisión Permanente del citado Consejo, hay que señalar que la única ejercida en el ejercicio 1990 ha sido la de aprobar la participación del Organismo en el capital de determinadas sociedades.

III.6.3.1.1.- Inversiones

La totalidad de las inversiones del capítulo 6º "Inversiones reales" están encuadradas en 11 proyectos, los cuales a su vez están agregados en los "superproyectos" denominados "Equipos informáticos" y "Estudios y Publicaciones" del MINER.

En estos gastos se han observado las siguientes deficiencias:

a) Errores en la elaboración del presupuesto de gastos. La totalidad de los gastos del capítulo 6º "Inversiones reales" fue presupuestada en el artículo 63 "Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios" y a este artículo se imputaron todas las obligaciones reconocidas. Analizadas éstas, se ha podido comprobar que 30 millones de pesetas corresponden a adquisiciones de inmovilizado material y que el resto, 384 millones, son inversiones de carácter inmaterial, de acuerdo con lo señalado por el Organismo. Estas últimas son imputables al artículo 64 "Gastos de inversiones de carácter inmaterial"que, como se señalaba anteriormente, no está dotado en el presupuesto.

b) Disparidades entre los créditos asignados a cada proyecto en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado y las obligaciones reconocidas en relación con dichos proyectos. Así, en el proyecto "Difusión del mercado único", con un crédito de 107 millones de pesetas, no se reconocieron obligaciones. Por el contrario, en el proyecto "Estudios y publicaciones" con un crédito asignado de 40 millones de pesetas, se reconocieron obligaciones por importe de 132 millones de pesetas. Aunque ninguno de los proyectos tenga carácter vinculante, las discrepancias señaladas revelan, de alguna manera, deficiencias en la planificación o en la ejecución.

c) Una incorrecta aplicación presupuestaria. Existe una falta de concordancia entre las previsiones contenidas en las memorias de los diferentes proyectos de inversión y los gastos realmente imputados. Examinados estos últimos por el Tribunal, tan sólo 159 millones de pesetas (un 38 %) coinciden con los previstos. Asimismo, se ha comprobado que gran parte del resto de los gastos que son aplicados por el IMPI al capítulo 6º (entre otros, gastos de teléfono, mantenimiento de equipos, servicios de mensajería, material informático no inventariable, etc.) tienen la consideración de gastos corrientes por naturaleza, por lo que, aún cuando tengan relación con los diferentes proyectos de inversión, deberían haber sido imputados al capítulo 2º, "Gastos corrientes en bienes y servicios".

III.6.3.1.2.- Participación en el capital de sociedades privadas

La participación está prevista en el Real Decreto 877/1977, que regula la organización y funciones del IMPI, como un medio de contribuir a la financiación de las PYME. De acuerdo con el Reglamento Orgánico, la participación se llevará a cabo cuando la actuación de las sociedades o entidades participadas sea el resultado de una acción colectiva de empresas, empresarios o asociaciones, dirigidas a la expansión comercial de sus productos; a la investigación para la innovación de procesos y productos; al fomento de nuevas tecnologías y del diseño industrial; a la gestión centralizada y al mejor afianzamiento de los créditos y otras operaciones financieras.

El límite de cada participación se sitúa en el 45 % del capital de dichas sociedades y por un periodo máximo de tres años, prorrogables en casos extraordinarios por otros tres. De forma excepcional y previo Acuerdo de Consejo de Ministros, la participación podrá tener carácter permanente. Por su parte, el Real Decreto 953/86 estableció la posibilidad de prorrogar la participación del IMPI en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) hasta el 31 de diciembre de 1991.

Desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1990 el IMPI ha participado en las siguientes sociedades:

SOCIEDADES	Nº	IMPORTE (millones de pesetas)
- Sistema de garantía recíproca:.....	26	2.893
. Sociedades de Garantía Recíproca	24	
. Sociedades de reafianzamiento (SOGASA).....	1	
. Sociedad Mixta del 2º aval.....	1	
- Sociedades de acción colectiva.....	96	1.774
Total	122	4.667

No existe una normativa específica que regule el procedimiento para la participación del IMPI en estas sociedades, ni se han establecido criterios objetivos sobre los sectores más convenientes donde realizar dichas participaciones.

A 31 de diciembre de 1990, la cartera de valores del Organismo, de acuerdo con los datos facilitados por la Subdirección General de Financiación e Inversiones, alcanzaba un importe de 2.599 millones de pesetas, con la siguiente distribución:

SOCIEDADES	Nº	IMPORTE (millones de pesetas)
- SGR (pendientes de la desinversión).....	14	1.301
- SOGASA y Sociedad Mixta del 2º aval (carácter permanente).....	2	318
- Sociedades de acción colectiva.....	29	980
Total	45	2.599

Dicho importe no coincide por 52 millones de pesetas con el saldo a dicha fecha de la cuenta de inmovilizado financiero "Acciones y participaciones" (2.651 millones de pesetas). En la fiscalización se ha comprobado que la desinversión de una participación por importe de 53 millones de pesetas no se contabilizó en su momento, desconociéndose la naturaleza y la causa de otras diferencias[11].

En seis de las Sociedades de acción colectiva se ha sobrepasado el plazo de participación del IMPI. Todas ellas son empresas con dificultades en la gestión, cuya desinversión se encuentra en fase de negociación. Asimismo, la concesión de prórrogas a tres de las empresas cuya participación permanece en la cartera de inversiones del Organismo a 31/12/90, no se ha ajustado a lo regulado en la normativa. Por último, ninguna de las tres participaciones que tienen carácter permanente (las realizadas en SOGASA, la Sociedad Mixta del 2º aval y una sociedad de acción colectiva) cuenta con la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.

III.6.3.1.3.- Sociedades de Garantía Recíproca

Una parte importante de la participación del IMPI se ha dirigido a las SGR , en las que el Organismo asumió el papel de socio protector desde la creación de éstas. El Organismo ha participado tanto en las 24 SGR constituidas (integradas aproximadamente por 36.000 socios), como en la sociedad de reafianzamiento y en la Sociedad Mixta del 2º aval.

Ante la proximidad del vencimiento del plazo de participación, el IMPI inició en 1989 las negociaciones para proceder a la desinversión de su participación en dichas SGR, que alcanzaba a esa fecha un importe de 2.575 millones de pesetas. Dada su condición de socio protector e impulsor, el IMPI tuvo como objetivo en las negociaciones evitar la descapitalización del sistema de garantías recíprocas, y su hundimiento. Para ello ofreció su participación no sólo a las propias SGR sino también a las Comunidades Autónomas y a algunas Entidades financieras.

Los convenios de venta se firmaron durante los años 1990 y 1991, encontrándose pendientes al final de este año tan sólo 2 sociedades, una de las cuales está en proceso de disolución. De las 22 desinversiones realizadas en las SGR, la participación en 4 de ellas fue adquirida por las Comunidades Autónomas, otra participación fue adquirida por dos Diputaciones, 2 por Entidades financieras y las 15 restantes fueron compradas por las propias sociedades, aunque en algunos casos con el compromiso de las CCAA de capitalizar la sociedad. Se ha podido comprobar que una de estas últimas se encontraba en situación de quiebra técnica, por lo que la venta de la participación del IMPI tuvo carácter simbólico (1 peseta por acción).

El importe obtenido por la venta supone tan sólo el 18 % del valor nominal de las acciones. Esto ha supuesto una pérdida para el IMPI de 1.971 millones de pesetas, de los que 1.049 se imputaron al ejercicio 1990. Al analizar estos resultados hay que tener en cuenta, sin embargo, por un lado, la naturaleza y funciones de estas sociedades y, por otro, el objetivo final perseguido por el IMPI, es decir, la continuidad de funcionamiento de las SGR; ambas circunstancias han condicionado la valoración de las aportaciones en el momento de la desinversión.

Tras su retirada del capital de estas sociedades, el IMPI ha seguido apoyando el sistema de garantías recíprocas a través de la Sociedad de Garantías Subsidiarias, S.A. (SOGASA), sociedad de reafianzamiento. Dicho apoyo se concretó, en el ejercicio 1990, a través de una doble vía: por un lado, mediante un incremento de la participación del IMPI en el capital de dicha sociedad, por un importe de 150 millones de pesetas, y, por otro, subvencionando con 83 millones de pesetas, en concepto de apoyo financiero, las operaciones de reafianzamiento realizadas al amparo de lo regulado en la Orden ministerial de 14 de noviembre de 1990.

III.6.3.2.- Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnológica

Las subvenciones del subprograma 2 corresponden en su totalidad a las concedidas a entidades sin fines de lucro y previstas en el **Plan de promoción de diseño, calidad y moda para la pequeña y mediana empresa manufacturera** (en adelante **PLAN**). Este fue aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el 17 de diciembre de 1987, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1991. El resto de las subvenciones acogidas al **PLAN** (un 80 %), cuyo destino fueron empresas, se aplicó al programa presupuestario 723.B "Reconversión y reindustrialización".

De la fiscalización realizada sobre las subvenciones del citado subprograma, se obtienen los siguientes resultados:

a) La concesión de las subvenciones se efectuó al amparo de las normas que regulaban anualmente la convocatoria de subvenciones a

[11] De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la LFTCu, se remite testimonio a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal por las irregularidades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable señalados por el Ministerio Fiscal.

entidades sin fines de lucro que prestan servicio a determinadas industrias (ESFL) (Ordenes ministeriales de 17-2-88, 3-4-89 y 4-5-90), en lugar de hacerlo siguiendo las normas de aplicación del PLAN, (Ordenes ministeriales de 1-6-88 y 4-5-90).

Las actividades objeto de subvención, así como los sectores incluidos en su ámbito, son más amplios en la normativa de las ESFL que en la del PLAN, por lo que cabía la posibilidad de que se hubiera concedido alguna subvención distinta a la prevista en éste. No obstante, se ha comprobado por el Tribunal que todas las subvenciones concedidas estaban acogidas a dicho PLAN.

En todo caso, el Tribunal considera que fue innecesaria esta doble normativa ya que creó confusionismo y cierta rigidez. En efecto, a pesar de que las peticiones acogidas al PLAN estuvieron abiertas durante toda su vigencia (es decir hasta el 31-12-91), la tramitación de las peticiones de las ESFL sólo se realizaba una vez publicadas las citadas convocatorias anuales.

b) Parte de la tramitación de los expedientes (concretamente, las fases de estudio y evaluación de solicitudes así como la de verificación de la realización de los programas) ha sido encomendada al Centro de Promoción de Diseño y Moda y al IMPI, órganos técnicos de gestión del PLAN.

c) Para la verificación de los gastos e inversiones del programa subvencionado, el IMPI contrató en 1990, por falta de personal, los servicios de una empresa para la realización de las visitas de comprobación. En algunas de dichas visitas funcionarios del IMPI acompañaron al personal de la mencionada empresa. Para el resto de las visitas se ha podido constatar que el IMPI completó el contenido de las "Actas de comprobación de las cantidades subvencionadas" sin haber obtenido de la empresa contratada comunicación formal por escrito del resultado de la comprobación. Asimismo, no se hizo constar en dichas actas que los trabajos de verificación habían sido realizados por la empresa. Se ha podido comprobar por el Tribunal que este procedimiento irregular ha sido rectificado a partir del mes de marzo de 1991.

d) En 1990 se reconocieron obligaciones en 49 expedientes de 33 entidades beneficiarias; 11 de los expedientes correspondían a incorporaciones de crédito del ejercicio 1989, como consecuencia de las propuestas de libramiento de pago no capturadas en 1989 por el sistema de información contable y presupuestario (SICOP). El pago de estos expedientes incorporados se realizó a partir del mes de mayo de 1990, con un retraso de 5 a 7 meses por motivos estrictamente presupuestarios. Algunos beneficiarios habían constituido avales bancarios en 1989; estos avales no fueron liberados hasta el ejercicio 1990, una vez realizadas las verificaciones correspondientes, con el consiguiente perjuicio económico para dichos beneficiarios.

e) La distribución del importe de las subvenciones concedidas es muy desigual. De las 29 entidades beneficiarias en 1990, 6 recibieron importes superiores a 40 millones de pesetas, suponiendo en conjunto el 58 % de las obligaciones reconocidas. En el otro extremo, 14 entidades, recibieron subvenciones inferiores a 10 millones de pesetas, representando en conjunto el 10 % de dichas obligaciones. Al mismo tiempo, dadas las características de la convocatoria anual de estas subvenciones, gran parte de las entidades se repiten en los sucesivos ejercicios.

f) Del análisis realizado sobre una muestra de 27 expedientes (un 55 % del total) que representan el 88 % de las obligaciones reconocidas, se obtienen los siguientes resultados:

- Aunque los expedientes se encuentran en los órganos técnicos de gestión, parte de la documentación está en la SGPIT, lo que produce ciertas dificultades de control documental.

- Las resoluciones de concesión de las subvenciones no recogen con el mismo detalle los gastos por proyectos o actividades, no siendo tampoco homogéneos los criterios seguidos para modular la subvención, en función de los gastos reales.

- En cuatro expedientes de la muestra analizada, la resolución de concesión de la subvención tiene fecha posterior a la de verificación de los gastos e inversiones del programa aprobado lo que constituye una excepción al procedimiento seguido por los Centros Gestores derivado de lo establecido en la citada Orden Ministerial de 4-5-90.

III.6.3.3.- Dirección General de Industria

La DGI es la encargada de gestionar el subprograma 4 de modernización industrial del sector textil-piel, dotado con 500 millones de pesetas. Al término de 1990 no se habían efectuado autorizaciones ni disposiciones de crédito con cargo a dicho programa. La razón principal de esta nula ejecución presupuestaria está basada en el largo proceso de negociación y las discrepancias existentes entre las Autoridades nacionales y la Comisión de las Comunidades Europeas.

En efecto, el programa se presentó, para su aprobación por la Comisión, el dos de abril de 1990, formando parte del "Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 1990-1993". La inclusión fue debida a haberse estimado que el 70 % de las ayudas se destinaría a empresas ubicadas en dicha Comunidad Autónoma. El citado Programa Operativo llevaba implícito cofinanciación de los Fondos Estructurales comunitarios y se encontraba incluido en el Marco Comunitario de Apoyo a España para intervenciones estructurales.

Antes de la aprobación de la CEE, el MINER publicó la Orden de 30 de julio de 1990 que regulaba las ayudas del programa, indicando que las mismas estaban supeditadas al cumplimiento de lo dispuesto en materia de competencia dentro del Tratado Constitutivo de la CEE.

La Dirección General de la Competencia de la Comisión, en escrito de fecha 16 de noviembre de 1990, consideró, sin embargo, que en relación con estas ayudas, no se había cumplido lo dispuesto en el art. 93.3 del citado tratado, que establece la obligación de que la Comisión sea informada con antelación de los proyectos dirigidos a conceder ayudas los Estados miembros, para poder presentar sus observaciones. Esta consideración provocó la protesta de las Autoridades españolas y dio origen a diversas reuniones y escritos con diferentes Unidades de la Comisión, donde se expusieron las discrepancias y justificaciones a los diferentes puntos de vista sobre el particular.

Este proceso culminó con la aprobación por la Comisión, el 14 de diciembre de 1990, del citado Programa Operativo en el que se excluían, en tanto no se adoptase una decisión definitiva, las ayudas a la modernización industrial del sector textil-piel. El MINER, por su parte, decidió suspender las ayudas ante la imposibilidad temporal de plantear de nuevo su autorización por la Comisión para ser concedidas dentro del ejercicio 1990.

Ahora bien, como consecuencia de la publicación de la Orden ministerial de 30 de julio de 1990, que fijaba un plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de octubre de 1990, la DGI había recibido 126 solicitudes de ayuda a las que debía darse una respuesta. De dichas solicitudes, las procedentes de las Comunidades Autónomas de Valencia (64) y Castilla-La Mancha (19) fueron remitidas a las CCAA para su posible inclusión en sus programas de ayudas. En el caso de otras 20 solicitudes, cuyos proyectos de inversión podían quedar incluidos dentro de ayudas nuevas previstas por el MINER, se pidió documentación complementaria al objeto de su inclusión en el ejercicio 1991. Respecto al resto, no se adoptó ninguna resolución.

En el curso de la fiscalización se ha comprobado que durante el ejercicio 1991 y a pesar de contar con dotación presupuestaria, no se ha planteado a la Comisión Europea la aprobación de nuevas ayudas de este tipo, por lo que puede decirse que esta iniciativa ha sido abandonada.

III.7.- ANÁLISIS ESPECIAL SOBRE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL SECTOR PRIVADO

III.7.1.- INTRODUCCIÓN

Continuando con la línea marcada en Informes Anuales precedentes, el Tribunal ha practicado un análisis especial de las subvenciones corrientes y de capital otorgadas por diferentes servicios de la Administración Económica del Estado al sector privado, tanto al subsector de empresas privadas (artículos 47 y 77 del presupuesto de gastos) como al de familias e instituciones sin fines de lucro (artículos 48 y 78). Se entiende por Administración Económica del Estado el conjunto formado por los Ministerios de Economía y Hacienda; Obras Públicas y Urbanismo; Industria y Energía; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Transportes, Turismo y Comunicaciones.

En los Informes de 1988 y 1989 se analizaron las fases previas a la resolución de aprobación o denegación de las subvenciones. El de 1988 se ocupó del cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, mientras que el correspondiente a 1989 se centró en el análisis de ciertos aspectos de la tramitación de los expedientes de subvenciones, desde la recepción de solicitudes hasta la resolución de concesión o denegación de las mismas. En el presente informe el análisis cubre determinadas fases posteriores a los actos de concesión y pago; en concreto, se han analizado los sistemas de seguimiento y control implantados por los centros gestores para comprobar, una vez concedida o pagada la subvención, que los compromisos adquiridos por el beneficiario han sido cumplidos.

Los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado en esta materia ascendieron a 866.277 millones de pesetas, lo que representa el 6,8% del presupuesto total de gastos del Estado y un aumento del 19% en relación al ejercicio anterior. Dentro de ese total, los créditos correspondientes a la Administración Económica del Estado ascendieron a 227.945 millones de pesetas, correspondientes a 121 aplicaciones presupuestarias. Tras las modificaciones presupuestarias, los créditos definitivos alcanzaron 263.680 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 3,7% en relación al año anterior. Las obligaciones reconocidas, por su parte, ascendieron a 233.657 millones de pesetas, con un grado de ejecución del 89% y un incremento del gasto del 2% en relación al ejercicio anterior.

El alcance de esta fiscalización se ha extendido sobre cuatro tipos de subvenciones, con un total de obligaciones reconocidas en 1990 de 22.314 millones de pesetas.

Su determinación se ha producido por ser las más significativas de aquéllas que, conjuntamente, reunían los siguientes criterios:

1) Que las obligaciones reconocidas en 1990 de los correspondientes conceptos presupuestarios fuesen superiores a los 200 millones de pesetas.

2) Que el centro gestor debiera realizar un seguimiento del grado de cumplimiento por los beneficiarios de sus compromisos con posterioridad a la concesión o al pago de la subvención. Dicha obligación puede derivarse de la propia normativa reguladora, que prevea específicamente dicho seguimiento, o porque el centro gestor deba realizarlo en cualquier caso al tener el beneficiario que justificar el cumplimiento de los compromisos con posterioridad al pago de la subvención.

De la aplicación conjunta de estos criterios se obtiene un grupo de 26 líneas de ayuda que en 1990 han tenido unas obligaciones reconocidas de 37.290 millones de pesetas (el 84% de las cuales corresponde a 23 líneas de ayuda gestionadas por el Ministerio de Industria y Energía). En consecuencia, el alcance de la fiscalización ha abarcado el 59,8% de las obligaciones reconocidas por subvenciones gestionadas por la Administración Económica del Estado que tenían las características señaladas.

Estas han sido:

1 - Subvenciones para financiar acciones relativas al desarrollo de determinadas regiones desfavorecidas mediante un mejor acceso a los servicios avanzados de telecomunicaciones (Programa STAR 1987-1991). Cabe señalar que las subvenciones citadas han sido presupuestadas indebidamente en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos, "Inversiones reales", cuando lo correcto habría sido hacerlo en el Capítulo 7, "Transferencias de capital"[12].*

2 - Subvenciones relacionadas con las directrices del PEIN II (Plan Electrónico e Informático Nacional II). Estas subvenciones están gestionadas por la Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnologías y reguladas por Orden Ministerial de 3 de febrero de 1988.

3 - Subvenciones para la prevención de riesgos industriales derivados de la preservación del medio ambiente (PITMA, Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental). El ejercicio de 1990 fue el primero en el que se conceden estas subvenciones.

4 - Subvenciones para financiar los Planes de Viabilidad de Marina Mercante (PVMM). La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) aprobó ayudas por este concepto en el período 1989-1991 por 11.407 millones de pesetas. Uno de los compromisos comunes a todas las empresas navieras afectadas por los PVMM y beneficiarias de las subvenciones consistía en no repartir dividendos a los accionistas durante los cinco años siguientes a la aprobación de las ayudas. Dado que el cumplimiento de este compromiso sólo puede ser verificado "a posteriori", todas las subvenciones recibidas por las empresas hasta la fecha de realización de esta fiscalización, febrero de 1992, por importe de 7.220 millones de pesetas, tienen la consideración de subvenciones anticipadas.

Las características principales de estas subvenciones se reflejan en el siguiente cuadro:

SUBVENCIÓN	ORGANISMO GESTOR	REGULACION	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1990	PAGOS PROPUESTOS 1990	PAGOS ANTICIPADOS 1990	IMPORTE MUESTRA (%)
1.- Programa STAR (1987-1991)	DG Telecomunicaciones	Orden M. de 9-5-1988	7.866 MP	7.866 MP	1.021 MP	946 MP (92%)
2.- Plan Electrónico e Informático Nacional II (PEIN II)	DG Electrónica y Nuevas Tecnologías	Orden M. de 3-2-1988	6.425 MP	6.397 MP	9.507 MP (1989-1990)	797 MP
3.- Prevención riesgos industriales derivados preservación medio ambiente (PITMA)	Subscr. M°. Industria (1990) Secretaría Estado Industria (1991)	Orden M. de 1-8-1990	3.780 MP	3.780 MP.	3.780 MP.	641 MP (17%)
4.- Financiación de Planes de Viabilidad de Marina Mercante (PVMM)	DG Marina Mercante con CDGAE y SEPVMM	Orden M. 13-10-1989	4.243 MP	3.700 MP	7.220 MP (1989-Feb. 1992)	4.600 MP

El alcance temporal se ha determinado sobre las subvenciones concedidas en 1990, aunque los procesos de seguimiento y control se hayan desarrollado por regla general en ejercicios posteriores. Además, para obtener una visión más amplia, en algunos casos, el alcance se ha extendido a algunas subvenciones concedidas en 1989.

III.7.2.- OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

Los objetivos de la fiscalización han sido:

1) Verificar si los centros que gestionan las subvenciones han implantado y aplicado procedimientos de control y seguimiento que les permitan comprobar que el beneficiario ha cumplido los compromisos. En concreto, se han analizado los siguientes aspectos: a) Si en el acto de concesión de la subvención quedan suficientemente determinados los compromisos que asume el beneficiario, de forma que el encargado del seguimiento pueda evaluar el cumplimiento o no de los mismos; b) si los centros gestores emplean registros y sistemas de control que les permitan disponer de una información actualizada y completa sobre dicho seguimiento y c) si existen instrucciones o normas referidas a cada línea de ayuda que permitan realizar el control y seguimiento de cada subvención de forma homogénea.

2) Valorar, en su caso, si los citados procedimientos se aplican adecuadamente. Se ha considerado que el procedimiento de control y seguimiento se aplica adecuadamente cuando los centros gestores pueden obtener certeza, respecto a todas las subvenciones, del grado de cumplimiento por el beneficiario de los compromisos y, en el caso de que se detecten incumplimientos, inician actuaciones para que se produzca el reintegro de las subvenciones no justificadas (y, en su caso, se devengue el correspondiente interés de demora).

3) Analizar las causas que dan lugar a eventuales retrasos en las distintas fases del seguimiento. Para ello se han examinado detalladamente aquellos casos en los que el proceso de seguimiento ha tenido una duración superior al año desde la concesión de la subvención.

III.7.3.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Se exponen a continuación los resultados de la fiscalización de las subvenciones citadas, clasificados en función de los aspectos donde se han detectado mayores deficiencias.

III.7.3.1.- Pago anticipado de las subvenciones

Las normas reguladoras de las subvenciones del programa STAR, del PEIN II y del PITMA establecían la posibilidad de efectuar el pago de las subvenciones antes de que el beneficiario justificase la realización de la actuación subvencionada. Dicha posibilidad, que de concretarse requería la previa constitución de un aval, se establecía para aquellos casos en los que la naturaleza del proyecto subvencionable lo justificase. En las subvenciones correspondientes al PEIN II y PITMA el pago anticipado es la práctica habitual, según se desprende de los datos señalados en el apartado anterior, sin que se haya acreditado con carácter general que el pago anticipado de la subvención se haya debido, precisamente, a la naturaleza de los proyectos subvencionados . Los centros gestores manifiestan al respecto que, para realizar una gestión más eficaz, era preferible el procedimiento de pago anticipado al reducirse los trámites administrativos y presupuestarios.*

III.7.3.2.- Grado de determinación de los compromisos que adquieren los beneficiarios

En términos generales, las resoluciones de concesión de las subvenciones son ambiguas, en lo que se refiere al establecimiento de plazos para que el beneficiario justifique las inversiones que debe realizar y, en algunos casos, en cuanto al contenido concreto de los compromisos que asume.

En las subvenciones correspondientes al Programa STAR la Dirección General de Telecomunicaciones no establece para cada proyecto un plazo límite para la justificación de las inversiones subvencionadas. El único plazo que se fija es el de realización de los proyectos subvencionados y éste se ha cumplido en pocas ocasiones (de los once expedientes fiscalizados, cinco proyectos se terminaron fuera del citado plazo, habiéndose superado en dos de ellos incluso el plazo prorrogado). No es asumible, a este respecto, la pretendida confusión que se atribuye al Tribunal en las alegaciones entre las fechas de realización del proyecto y de certificación de los mismos.*

En las subvenciones correspondientes al PEIN II se ha observado una imprecisión de los compromisos que adquieren los beneficiarios. La Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnologías no ha emitido resoluciones individualizadas para cada una de las ayudas concedidas. Únicamente elabora relaciones de proyectos subvencionados, firmadas por el Director General de Electrónica y Nuevas Tecnologías, en las que no constan circunstancias particulares de cada proyecto subvencionado, como el importe de la inversión que se va a realizar, los plazos para completar y justificar la inversión u otras condiciones singulares de los proyectos. De esta manera la Dirección General carece de instrumentos para exigir a las empresas beneficiarias el cumplimiento de los compromisos, pues éstos no aparecen documentados. En este sentido, el Tribunal entiende que la documentación a la que se alude en las alegaciones no es suficiente para permitir una actividad de control adecuada por parte del centro gestor.*

La Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnologías debería, por tanto, emitir resoluciones individualizadas en las que se hicieran constar todos los compromisos y las condiciones singulares de los proyectos. Entre ellos debería encontrarse, como un compromiso más, la fecha límite para justificar las inversiones o actuaciones.

Las resoluciones y propuestas de concesión de subvenciones correspondientes al PITMA emitidas en 1990 no establecieron un plazo para que las empresas justificaran la realización de las

[12] Ver apartado I.2.2.1.A.3) de este Informe.

inversiones de los proyectos subvencionados. Una vez finalizado el plazo de ejecución material de los proyectos subvencionados, la Secretaría de Estado de Industria envió un escrito (de fecha 12 de julio de 1991) a las empresas beneficiarias, con las instrucciones y modelos normalizados, para que remitiesen la información y documentación justificativa sobre la ejecución de los citados proyectos. A estos efectos, se concedió a las empresas un plazo de diez días para recopilar los documentos justificativos, cumplimentar los modelos y remitirlos a la Secretaría de Estado.

De la muestra de expedientes seleccionados se ha comprobado que en la mayoría de los casos, dicho plazo fue superado. En algunos casos el incumplimiento fue por un margen muy amplio, como ocurrió con los expedientes 55, 231, 50 y 166. Por lo que respecta a los dos últimos, en febrero de 1992 las respectivas empresas no habían enviado la documentación. Ambas habían solicitado en 1991 una prórroga para la ejecución de los proyectos, pero la Secretaría de Estado no contestó esta solicitud ni reclamó el reintegro de las subvenciones concedidas de 141 y 2 millones de pesetas, respectivamente. Con posterioridad al trámite de alegaciones ha podido comprobarse por este Tribunal que las inversiones que corresponden al expediente 166 quedaron justificadas en marzo de 1993. Por lo que se refiere al expediente 50, se ha comprobado que en noviembre de 1993 la Dirección General de Servicios del Ministerio de Industria y Energía se dirigió a la Caja General de Depósitos ordenando proceder a la ejecución del aval que garantizaba el buen destino de la subvención.

Según consta en circulares internas, la Secretaría de Estado tenía previsto finalizar todas las funciones de comprobación de las justificaciones en los dos meses siguientes al envío a las empresas de las citadas instrucciones. En la mayoría de los casos este calendario no se cumplió.

Las empresas beneficiarias de las subvenciones relacionadas con los PVMM debían cumplir una serie de compromisos establecidos tanto en los Acuerdos de la CDGAE por los que se aprueban las subvenciones como en los Planes de Viabilidad elaborados por la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad de Marina Mercante (SEPVMM). Se ha observado que, con frecuencia, los citados compromisos aparecen insuficientemente definidos en los Acuerdos de la CDGAE y en los Planes de la SEPVMM, de forma que la Dirección General de la Marina Mercante, órgano encargado del control del cumplimiento de tales compromisos, encuentra dificultades objetivas para la realización de dicha labor. En numerosas ocasiones los compromisos son tan ambiguos como los consistentes en destinar la subvención a "mejorar la estructura comercial y administrativa", o al "incremento de la productividad", aspectos que por no cuantificados son de difícil evaluación.

De la lectura de los Acuerdos de la CDGAE por los que se aprueban las subvenciones surgen además dudas sobre la interpretación de los plazos de que disponen las empresas para cumplir los compromisos que asumen. Por otra parte, no se especifican los plazos en los que las empresas deben presentar la justificación del cumplimiento de dichos compromisos. La Dirección General no ha impartido instrucciones a las empresas beneficiarias sobre la forma, contenido y plazos de la documentación que deben remitir para justificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

III.7.3.3.- Documentación del seguimiento

En las subvenciones del PEIN II los registros informáticos de seguimiento de los proyectos no recogen ciertas fases intermedias del proceso, importantes para asegurar un control coordinado del cumplimiento por el beneficiario de todos sus compromisos. Esto ha provocado diversos errores en el seguimiento de los expedientes 160/89, 314/89, 380/89 y 788/89. También se han observado casos en los que los datos de los registros de seguimiento no estaban actualizados.

En las subvenciones del PITMA se ha detectado una duplicidad innecesaria de registros para ciertos datos, así como algunos errores de transcripción y actualización.

Se ha observado, asimismo, un deficiente sistema de archivo de la documentación referida al seguimiento y control de las subvenciones relacionadas con los PVMM. Dicho sistema se caracteriza por la dispersión, la ausencia de expedientes únicos para cada subvención y la falta de codificación y clasificación de los documentos.

III.7.3.4.- Eficacia del proceso de control y seguimiento

La normativa reguladora de las subvenciones relacionadas con el programa STAR, con el PEIN II y con el PITMA no definió instrumentos específicos ni procedimientos de control y seguimiento para que los gestores de las mismas pudieran comprobar que el beneficiario cumple finalmente sus compromisos. Han sido los propios centros gestores los que han establecido tales procedimientos, mecanismos o instrumentos a través de instrucciones internas. En la aplicación de estos procedimientos se han detectado algunos errores que ponen de manifiesto la ausencia de un control homogéneo y adecuado de todas las subvenciones concedidas en cada línea de ayuda.

En algún caso, los centros gestores no han reclamado el reintegro de las subvenciones no justificadas o en las que el beneficiario ha incumplido sus compromisos. Asimismo, cabe señalar que en la mayor parte de los casos en que se reclama el reintegro de subvenciones no se carga el correspondiente interés de demora, tal y como establece el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria en su art. 36[13]. Y ello con independencia de que, como se afirma en las alegaciones, las Órdenes Ministeriales de concesión anteriores a 1990 no contemplen la obligatoriedad de la exigencia de intereses de demora. Dentro de estos dos grupos de deficiencias, se puede destacar:*

En las subvenciones del programa STAR la Dirección General de Telecomunicaciones ha solicitado el 23 de octubre de 1991 el reintegro de 33 millones de pesetas por la subvención del expediente 536/90, sin considerar el correspondiente interés de demora. Este Tribunal considera que, en contra de lo que se afirma en las alegaciones, el motivo de incoacción de este expediente -efectuar una inversión menor de la inicialmente prevista- debe considerarse inequívocamente como una causa de incumplimiento de las condiciones de la subvención, lo que origina una deuda con la Hacienda Pública susceptible de devengar interés de demora, según el art. 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. Por tanto, es exigible, junto con la devolución de la subvención no aplicada, el interés de demora correspondiente.*

En las subvenciones relacionadas con el PEIN II se ha comprobado que la Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnologías, cuando solicitó el reintegro total o parcial de las subvenciones no justificadas (788/89, 380/89 y 437/89 por 6.500.000, 2.440.000 y 1.262.000 pesetas respectivamente), no cargó los correspondientes intereses de demora. A este respecto, hay que manifestar que las cantidades solicitadas por la Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnologías en concepto de principal, han sido ya ingresadas en el Tesoro Público.

En el expediente 29/88 la empresa beneficiaria presentó una justificación de inversión por un importe inferior en 20 millones de pesetas a la que correspondería de acuerdo con el compromiso asumido. Esto debería haber conducido a la Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnologías a solicitar el reintegro de la subvención en la parte proporcional correspondiente, por importe de 6 millones de pesetas. Sin embargo, la Dirección General ha compensado indebidamente el defecto de justificación citado con el exceso de inversiones justificadas por la misma empresa en el ejercicio siguiente por el expediente 314/89. Aunque dicho expediente se refiere al mismo proyecto de inversión, corresponde a una subvención aprobada individualmente y con independencia de la primera.

Respecto a las subvenciones del PITMA se ha comprobado que a la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización, 22 de febrero de 1992, no se había solicitado el reintegro de ninguna de las subvenciones percibidas no justificadas derivadas de la renuncia expresa del interesado (como en el expediente 276/90 por importe de 5.700.000 pesetas) y sólo en algún caso se había producido este reintegro por iniciativa del beneficiario. Con posterioridad al trámite de alegaciones ha podido comprobarse por este Tribunal que, en octubre de 1993, la Dirección General de Servicios del Ministerio de Industria y Energía se dirigió a la Caja General de Depósitos ordenando proceder a la ejecución del aval que garantizaba el buen destino de la subvención.

En los casos en que el reintegro se había producido por iniciativa del propio interesado, tampoco se han solicitado los correspondientes intereses de demora, previstos en la propia normativa que regula la subvención. Así, en el expediente número 39 la empresa reintegró la subvención por 13 millones de pesetas el 4 de noviembre de 1991 y hasta la fecha de realizar esta fiscalización no se le han reclamado intereses.

Tampoco se había solicitado el reintegro en otros casos en los que no se justificó la inversión en plazo y no constaba la renuncia expresa a la subvención (es el caso de los expedientes 50 y 166, citados en el apartado III.7.3.2). La justificación para actuar de tal forma, según manifiesta la oficina de seguimiento del grupo PITMA, fue la posibilidad de que transcurrido un mayor plazo las entidades beneficiarias aportaran la documentación justificativa, circunstancia que en algunos casos no se produjo.

Por otra parte, en el expediente 305/90 se ha dado conformidad a la inversión de 4 millones de pesetas justificada por el beneficiario, cuando dicho importe debería haber ascendido a 6,5 millones de pesetas. Detectado el error a consecuencia de la fiscalización, la Secretaría de Estado de Industria ha procedido a emitir una nueva acta de comprobación que dé apertura al proceso de reintegro de la subvención no justificada.

Finalmente, y al margen de lo anterior, procede también señalar que la Orden de 13 de octubre de 1989, reguladora de las subvenciones relacionadas con los PVMM, determinó que la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad de Marina Mercante (SEPVMM) asistiría a la Dirección General de Marina Mercante en el seguimiento y control del cumplimiento de los Planes por las empresas. Sin embargo, desde la misma creación de esta Sociedad se estableció su extinción a 31 de diciembre de 1990, como así ha ocurrido, por lo que la Dirección General ha tenido que asumir desde entonces la totalidad de la labor de seguimiento y control.

Las actuaciones de la Dirección General en materia de seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos de las empresas beneficiarias de las subvenciones ha presentado notables insuficiencias. Así, no consta formalmente que se hayan realizado comprobaciones de la realización de las inversiones comprometidas por las empresas en los Planes y en los Acuerdos de la CDGAE, ni que se hayan realizado auditorías u otros procedimientos de control sobre el destino otorgado a las subvenciones concedidas, mecanismos previstos con carácter indicativo en la Orden de 13 de octubre de 1989. La Dirección General ha solicitado en algunos casos informes de auditoría externa de carácter financiero sobre las cuentas de las empresas beneficiarias, pero estos informes carecen de relevancia a efectos de comprobar el destino de las subvenciones y de acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

[13] Ante la posible existencia de indicios de responsabilidad contable en esta materia, apreciados por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, continuarán las actuaciones fiscalizadoras, que podrán culminar, en su caso, en la apertura de pieza separada de acuerdo con el artículo 45 de la LFTCu.

III.7.3.5.- Otros aspectos del proceso de control y seguimiento

En relación con las subvenciones del PEIN II cabe señalar que el proceso de seguimiento y control del cumplimiento por los beneficiarios de sus compromisos se ha visto dificultado por las siguientes circunstancias:

a) Las resoluciones de concesión de las subvenciones no establecen fechas concretas para que el beneficiario justifique las inversiones.

b) Se producen retrasos injustificados, por parte de los centros gestores, en la finalización del proceso de certificación de las inversiones que acredita el beneficiario. Una causa de los retrasos es la deficiente formalización de las actas de comprobación de las inversiones, en las cuales no se recoge en el acto la firma de conformidad de la empresa beneficiaria.

c) La dotación de técnicos encargados de realizar la comprobación de las inversiones es insuficiente. En el 45% de los expedientes examinados la comprobación se ha prolongado por un período superior a 6 meses.

Por lo que se refiere a las subvenciones del PITMA, el proceso de seguimiento es compartido por las unidades centrales del Ministerio de Industria y las Direcciones Provinciales, dedicándose éstas únicamente a subvenciones inferiores a 25 millones de pesetas de ciertas líneas de ayuda. En los expedientes cuyo seguimiento corresponde a las unidades centrales del Ministerio se ha observado un notable retraso. Así, cuando habían transcurrido más de 7 meses respecto del plazo en que los beneficiarios debían haber presentado la justificación de la realización de las inversiones subvencionadas, únicamente se había certificado la justificación de las inversiones en 9 de los 122 expedientes de subvenciones concedidas en 1990. Se han observado, asimismo, varios casos en los que el Ministerio ha demorado injustificadamente el levantamiento de acta de incumplimiento de los compromisos de los beneficiarios, a la espera de que éstos presentasen, fuera de plazo y sin prórroga concedida formalmente, dichas justificaciones.

En cuanto a los procesos de seguimiento desarrollados por las Direcciones Provinciales, cabe señalar que éstas actuaron según unas instrucciones remitidas por las unidades centrales, que pueden ser calificadas como incompletas y ambiguas en materias como la forma en que deberían actuar estas unidades controladoras y el momento en que deberían remitir la documentación cuando las empresas renunciasen a las subvenciones o simplemente no justificasen las inversiones, solicitando o no prórroga.

Por otra parte, la Dirección General de la Marina Mercante destinó un único funcionario, a tiempo compartido con otras funciones, al control y seguimiento de las subvenciones relacionadas con los PVMM. Se considera que tales funciones tienen la suficiente importancia como para que la Dirección General destine mayores recursos.

III.8.- FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES OTORGADAS POR LOS MINISTERIOS DE SANIDAD Y CONSUMO, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CULTURA, JUSTICIA, ASUNTOS SOCIALES Y ASUNTOS EXTERIORES, CON CARGO A CRÉDITOS CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 77 Y 78 DEL PRESUPUESTO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS FINANCIADAS CON LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF

En este apartado del Informe se recogen los resultados de la fiscalización de determinadas subvenciones otorgadas con cargo a los créditos consignados en los artículos presupuestarios que se citan por los Ministerios de Sanidad y Consumo (III.8.1), Trabajo y Seguridad Social (III.8.2) y Cultura (III.8.3), así como de aquellas otras, que financiadas con cargo a la asignación tributaria del IRPF, se gestionan por los Ministerios de Justicia, Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores (III.8.4)

La realización del gasto originado por las subvenciones y ayudas públicas supone la obligación de justificar ante la Administración la aplicación o empleo de los fondos transferidos (art. 82 TRLGP) y la de rendir cuentas al Tribunal de las respectivas operaciones (art. 34 LFTCu). En las subvenciones de capital la obligación de rendir cuentas recae sobre los funcionarios que realicen el gasto; por el contrario, en las subvenciones corrientes dicha obligación recae sobre los perceptores de las mismas, sin perjuicio de las facultades de control de la Administración (art. 128 TRLGP).

La LFTCu en su art. 36 permite que en determinadas circunstancias los justificantes (cuentas justificativas) de las distintas partidas puedan ser sustituidos por certificados en que se acredite que los mismos se encuentran a disposición del Tribunal de Cuentas. Por el contrario, no se contempla excepción alguna al deber de remisión de las cuentas (estados contables) de las operaciones realizadas por quienes como los perceptores de estas subvenciones están sujetos al régimen de contabilidad pública (art. 123 TRLGP).

La inobservancia por éstos del deber de rendición de cuentas al Tribunal, comportamiento por otra parte muy generalizado, puede ser atribuible a la falta de reglamentación de los citados artículos del TRLGP, si bien esta circunstancia no exime del cumplimiento. De otra parte dicha inobservancia no supone necesariamente que se haya incumplido el deber de aportar ante la Administración los justificantes del gasto realizado.

La fiscalización de las subvenciones de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Trabajo y Seguridad Social y de Cultura se ha realizado partiendo de estas premisas legales y con objeto de verificar su cumplimiento, aun cuando es obligado reconocer que la falta de reglamentación de la Ley General Presupuestaria en esta materia da lugar, frecuentemente, a inseguridad sobre las actuaciones a realizar tanto por los perceptores como por la propia Administración.

III.8.1.- SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

La fiscalización ha tenido por objeto la gestión de las subvenciones y ayudas concedidas a Empresas privadas (arts. 47 y 77 de la clasificación económica de los créditos) y a Familias e Instituciones sin fines de lucro (arts. 48 y 78) para el desarrollo de distintos programas del Ministerio de Sanidad.

El examen se ha orientado principalmente a comprobar si se cumplen los principios de publicidad y libre concurrencia en la adjudicación y si se justifica adecuadamente la aplicación de los fondos librados por los perceptores. La fiscalización no ha comportado la auditoría de los estados financieros de los perceptores sino que se ha practicado sobre los expedientes y cuentas justificativas obrantes en la Administración o en el Tribunal, que en algunos casos han sido requeridas expresamente. Los perceptores en ningún caso han rendido cuentas o estados financieros al Tribunal, pese a estar obligados a ello según se expone en la introducción a este apartado III.8.

1. Ejecución presupuestaria

La ejecución presupuestaria de los créditos examinados por cada artículo ha sido la siguiente:

(en millones de pesetas)

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% GRADO EJECUCIÓN
Art. 47	75	-	75	-	-
Art. 77	-	-	-	-	-
Art. 48	1.288	19	1.307	1.259	96
Art. 78	350	98	448	208	46
T O T A L	1.713	117	1.830	1.467	80

El grado de ejecución media es de un 80% toda vez que para unos créditos finales de 1.830 millones de pesetas las obligaciones reconocidas se han elevado a 1.467 millones de pesetas. Con cargo a los créditos para transferencias a empresas (aplicaciones 26.07.413 B 471 y 26.09.413 A.470) no se han reconocido obligaciones.

Las modificaciones presupuestarias se sitúan en el 7% de los créditos iniciales, y han sido debidas a incorporaciones de remanentes de crédito comprometidos en el ejercicio anterior.

2. Subvenciones del servicio 01 "Ministerio y Subsecretaria"

De las subvenciones gestionadas por el Departamento, 70 millones corresponden al servicio 01 "Ministerio y Subsecretaria" y tienen por finalidad la concesión de becas para formación y perfeccionamiento del personal sanitario en Estados Unidos (becas Fulbright), Francia, Portugal y Reino Unido. Se conceden mediante convocatoria pública y se justifican mediante facturas de los gastos de desplazamiento, documentos acreditativos de las transferencias al extranjero de los importes de las becas, y con memorias de los propios becarios, e informes de los Organismos colaboradores oficiales[14]. También se han satisfecho con cargo a este crédito los gastos de administración del Programa Fulbright/MSC por un importe de 3.838.214 Ptas. mediante dos libramientos a favor de la Comisión de Intercambio Cultural entre España y Estados Unidos y que se justifican exclusivamente con certificados de los gastos realizados.*

3. Subvenciones gestionadas por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios

Esta Dirección gestiona una única subvención de 50 millones de pesetas nominativa a favor de la Asociación Española de Hemofilia de la Seguridad Social, lo que excluye la necesidad de convocatoria pública. Aun cuando la finalidad específica no consta en el acuerdo de concesión, según la información suministrada al equipo de fiscalización contrastada con diversos antecedentes, aquélla ha consistido en ayudar a hemofílicos infectados de sida como consecuencia de transfusiones sanguíneas.

El crédito se ha agotado en su integridad. Se debe destacar la demora en aplicarlo, ya que la disposición del gasto es de 23 de octubre de 1.990 y las propuestas de pago (documentos OK) de noviembre y diciembre del mismo año.

La justificación, remitida a requerimiento de este Tribunal, consiste en recibos y copias de cheques o transferencias expedidas por la Real Fundación Victoria Eugenia. En una comunicación de la Federación Española de Hemofilia de la Seguridad Social se hace constar el destino global dado a los fondos.

Desde una perspectiva formal ha de destacarse la distinta personalidad de la Entidad beneficiaria (Asociación Española de Hemofilia de la Seguridad Social), la Entidad a cuyo nombre están los justificantes (Real Fundación Victoria Eugenia), y la Entidad que informa sobre el destino de las ayudas (Federación Española de Hemofilia de la Seguridad Social). Sin perjuicio de las relaciones jurídicas o económicas que puedan existir entre ellas, no existe ningún acuerdo de la Administración en que se base la participación de las dos últimas entidades en la gestión y justificación de las subvenciones.

[14] A la fecha de redacción de este proyecto de resultados de fiscalización está pendiente de recibir certificación de las memorias de los becarios e informes de los Organismos recibidos en el Ministerio.

La condición nominativa de la subvención no debería excluir que por el Ministerio se ejerza algún tipo de control sobre los criterios de distribución y destino dado a los fondos por la entidad perceptora. No se han definido, al menos formalmente, tales criterios y la causa que motiva cada una de las ayudas; unas veces aparece en los recibos, y otras no.

De otra parte debe valorarse por el Ministerio, y no consta que lo haya hecho, la posibilidad de que a las ayudas a personas infectadas por el virus del SIDA al recibir transfusiones vengan a acumularse indemnizaciones como consecuencia de reclamaciones judiciales, que ya comienzan a producirse.

4. Subvenciones gestionadas por la Dirección General de Planificación Sanitaria

Las subvenciones gestionadas por la Dirección General de Planificación Sanitaria, con las finalidades que más adelante se especifican, ascienden a 1.095 millones de pesetas en términos de obligaciones reconocidas, que han sido imputadas al programa 413 A "Planificación sanitaria". Las ayudas se otorgan mediante convocatoria pública, con las excepciones que se detallan más adelante.

Según las Ordenes de convocatoria, los solicitantes quedan obligados a presentar una amplia documentación y a adoptar una serie de acuerdos, cuya exigencia debería reconsiderar la Administración en el futuro, ya que pueden resultar excesivamente gravosos para los beneficiarios sin que sean necesarios, en fase de selección, para satisfacer el objetivo cautelar con ellos perseguido, como se pone de manifiesto a continuación.

Se exige frecuentemente un compromiso de aportar la diferencia entre el coste total del programa y la subvención concedida, aunque ésta ya sea menor que la subvención solicitada. Dicha exigencia previa parece improcedente, teniendo en cuenta que la institución beneficiaria desconoce el importe de la subvención que va a obtener, con lo que se ve forzada a asumir una obligación antes de conocer su cuantía.

En relación con las alegaciones al párrafo anterior, en las que se hace constar que "en algunas convocatorias del ejercicio 1991 ya se suprimió la aportación de dicho compromiso y en 1992 ya no se exige en ninguna de las Órdenes de convocatoria del Departamento", se aclara que el Tribunal de Cuentas nada objeta a que se exija al beneficiario el compromiso de aportar la diferencia entre el coste total del programa y la subvención concedida, limitando su crítica a que dicho compromiso se exija antes de que el perceptor conozca el importe de la subvención concedida.*

Entre los documentos que podrían posponerse para su presentación exclusiva por los beneficiarios pueden señalarse los relativos a situación fiscal y cotizaciones a la Seguridad Social, ya que el art. 81 TRLGP sólo exige estar al corriente de obligaciones fiscales y sociales con anterioridad al cobro, pero no a la concesión.

Los acuerdos denegatorios no son motivados ni se trasladan a los interesados.

Del examen de los distintos créditos resulta:

a) Convenios para financiación de gastos de formación de personal sanitario (132 millones).

El objetivo de los convenios es la realización de cursos y actividades en el marco de los programas de formación y actualización profesional de las instituciones beneficiarias.

No existen normas reguladoras de la concesión ni convocatoria pública. Aun cuando los potenciales beneficiarios aparecen definidos con cierta concreción en el concepto presupuestario, ("Para toda clase de gastos, incluso personal, que origine la formación continuada de personal sanitario llevada a cabo mediante Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo General del Colegio Oficial de Médicos, de Diplomados de Enfermería o Sociedades Científicas o cualquiera otra Institución privada sin animo de lucro"), la necesidad de dichas normas subsiste a fin de establecer criterios de asignación y las condiciones para el acceso y justificación de las ayudas, necesidad que no queda desvirtuada por las alegaciones formuladas.*

Los libramientos se hacen basados en el presupuesto que figura en convenio. La justificación aportada consiste en informes sobre el desarrollo de los cursos y a veces en una factura global emitida por el propio beneficiario; no se aportan justificantes de los gastos realizados, excepto en el caso de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, que aporta documentación justificativa si bien incompleta. La omisión de justificantes del gasto es contraria al propio texto de los convenios suscritos con la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia y el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos. Por el contrario, según otros convenios (Diplomados en enfermería y Colegios Oficiales de Médicos), la justificación exigible se limita a un informe económico.

b) Subvenciones a Instituciones hospitalarias por trasplantes de órganos (270 millones).

La dotación presupuestaria se ha destinado a financiar la actividad extractora y trasplantadora llevada a cabo en hospitales en el año anterior. Se subvencionan los gastos realizados por extracciones y trasplantes de riñón, hígado y corazón, a razón de 65.597 Ptas. por trasplante y doble cantidad por extracción, según los criterios establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 31 de agosto de 1.990.

La distribución se hace en favor de una serie de hospitales que aparecen relacionados en el expediente con expresión de los trasplantes realizados. Contrariamente a lo ocurrido en el ejercicio 1.989, en el año 1.990 no existe convocatoria pública, sin que conste a este Tribunal si los centros relacionados son todos los que tendrían derecho a solicitar la ayuda.

c) Subvenciones a la Cruz Roja Española para paliar el déficit de Instituciones hospitalarias (200 millones).

Estas ayudas de carácter nominativo, se justifican con certificaciones del déficit expedidas por la propia Institución.

Lo procedente sería la rendición de cuentas o estados contables y la certificación de que los justificantes se encuentran a disposición del Tribunal de Cuentas, según se expresa al comienzo del apartado III.8 de este Informe.

d) Ayudas para información, prevención, detección y tratamiento de los afectados por virus de inmunodeficiencia humana -VIH- (137 millones).

Para la financiación de los gastos derivados de la "información, prevención, detección y apoyo psicosocial y tratamiento de los afectados por VIH" existen dentro del Presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo dos partidas presupuestarias destinadas respectivamente a Instituciones hospitalarias y extrahospitalarias y a Instituciones sin fines de lucro. La primera puede destinarse a subvencionar toda clase de gastos corrientes, en tanto en la segunda se excluyen los de personal.

Los créditos finales para estas atenciones han sido respectivamente de 51 y 93 millones de pesetas y su grado de ejecución se sitúa en torno al 95%.

Ante la insuficiencia de la documentación obrante en el Tribunal de Cuentas, que en ningún caso comprendía copia de los expedientes, memorias ni justificantes de los gastos realizados por los beneficiarios, se efectuaron requerimientos al Ministerio para el envío de datos y finalmente se desplazó un equipo para completar el examen de antecedentes. Como consecuencia de todo ello se han extraído las conclusiones que se exponen a continuación.

Por Instituciones hospitalarias y extrahospitalarias se solicitaron subvenciones por un importe de 208 millones de pesetas y se otorgaron por un importe de 47 millones de pesetas. Los centros beneficiarios han sido ocho sobre un total de once solicitantes.

Por Instituciones benéfico-privadas se solicitaron subvenciones por un importe de 375 millones de pesetas y se otorgaron por un importe de 89. Las Instituciones beneficiarias han sido seis sobre un total de nueve.

Las primeras propuestas de pago para hacer efectivas las subvenciones se formulan en el mes de diciembre, lo que imposibilita llevar a cabo los programas dentro del ejercicio. De otra parte, no se establecen plazos para justificar.

Por esta y otras causas existe un considerable retraso en la justificación. A la fecha en que se desarrollaron las actuaciones fiscalizadoras (febrero 1.992) estaban pendientes de justificar subvenciones por un importe de 71 millones de pesetas.

El problema se agrava cuando los perceptores son hospitales de la Seguridad Social ya que los libramientos se expiden a favor de la Tesorería de la Seguridad Social o servicios equivalentes de las Comunidades Autónomas, y esto produce demoras importantes. Hasta la fecha únicamente el Hospital General Universitario del Insalud de Guadalajara ha justificado la aplicación del primer pago de la subvención y percibido el segundo (16/12/91).

De otra parte existen aspectos tales como si se ejecuta o no la parte del programa no subvencionada, o bien, si se respeta el porcentaje de gastos de personal subvencionables, empleo efectivo en el programa de determinados gastos de material, etc., que no pueden comprobarse a partir de las cuentas justificativas. De estos extremos debiera dar cuenta la Memoria que han de redactar las Instituciones (art. 10 O.M. de 21/3/90) y la comprobación de la inversión que corresponde verificar a la Subsecretaría (art. 11), pero no existen tales Memorias ni informe alguno sobre comprobación de la inversión.

e) Subvención de acciones dirigidas a la promoción de donación de sangre (125 millones).

Estas subvenciones tienen por objeto promover la donación de sangre y plasma, en cuya consecución juegan un importante papel las Asociaciones y Hermandades de donantes que absorben la mayor parte de las ayudas.

Las Hermandades de donantes de sangre son entidades privadas, que se ubican dentro de centros hospitalarios, donde ejercen la labor de extracción y depósito de sangre. Tienen un tiempo de existencia de hasta 30 años. A partir de 1.986 comienzan a crearse los Centros de transfusión de sangre y paulatinamente van integrándose en ellos. Se financian con ayudas de los hospitales y con subvenciones y aportaciones privadas.

Se tiende a que estas subvenciones sean gestionadas por las CCAA. En el ejercicio 1.992 se dan a las organizaciones directamente por última vez.

Según la Orden de convocatoria (BOE de 31/3/90) la selección de los programas se hace por un comité de evaluación atendiendo a su calidad técnica y dando prioridad a los elaborados y ejecutados desde centros de transfusión sanguínea o bancos de sangre.

Los libramientos para pago de las subvenciones otorgadas tuvieron lugar a partir del mes de octubre. El art. 7 de la Orden de convocatoria dispone que la Dirección General de Planificación Sanitaria certificará la realización de los objetivos previstos y elevará la propuesta de pago en favor de aquellas entidades que hayan cumplido los programas. De dicho artículo parece deducirse que los pagos se han dé realizar con posterioridad a la realización de la actividad por los beneficiarios. En la práctica se han hecho con carácter previo, lo cual priva de contenido a las certificaciones emitidas.

Aun cuando la Orden de convocatoria no establece normas sobre justificación, mediante comunicaciones singulares a los beneficiarios se les reclama una Memoria y las facturas de gastos realizados.

A la fecha de realización de esta fiscalización estaban pendientes de justificación en su totalidad cuatro subvenciones por un importe de 20 millones, de los que 7 millones están en tramitación de reintegro según se afirma en las alegaciones. Otras cuatro habían sido justificadas parcialmente quedando 8,7 millones de pesetas pendientes.*

Por lo que se refiere a la Hermandad de Donantes de Sangre de León y la Federación Nacional de Donantes de Sangre, debe señalarse que tienen una peculiar relación. La Hermandad cede el uso de sus locales a la Federación a cambio de que esta se haga cargo de sus gastos de funcionamiento. De 11 millones de pesetas otorgadas a la Federación, 2 se justifican como gastos de gestión realizados por la Hermandad. En 1.989 no aparecía consignado como ingreso en los presupuestos de la Hermandad este importe. Por esta y otras causas, la IGAE, a petición del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha realizado, según consta en las alegaciones, un control financiero sobre la Federación y Hermandad citados , que ha dado lugar a la tramitación de un reintegro por importe de 4.370.360 pesetas, correspondiénte a una parte no justificada de la subvención recibida por la Federación.*

f) Programa de vigilancia de malformaciones congénitas (23 millones).

Este gasto, aun cuando formalmente es una subvención a Instituciones sin fines de lucro, se aplica a la financiación de un estudio de vigilancia epidemiológica de malformaciones congénitas, que se paga a medida que la Administración lo recibe de conformidad, según resulta de la Resolución que convoca el concurso. Su tratamiento presupuestario, en consecuencia, no es el adecuado, pues se trata de un gasto real a tenor de los antecedentes que resultan del expediente administrativo.

g) Construcción, acondicionamiento y equipamiento de hospitales dependientes de Instituciones sin fines de lucro.

Estas subvenciones se destinan a la financiación de obras y equipamiento de hospitales pertenecientes a Instituciones benéfico-privadas que vengan ejerciendo una acción asistencial importante dentro de su ámbito.

Los créditos iniciales para estas atenciones en el ejercicio 1.990 han sido 350 millones de pesetas que fueron incrementados con incorporaciones por un importe de 98 millones. Las obligaciones reconocidas en el ejercicio importan 208 millones de pesetas de las cuales 112 millones corresponden a subvenciones otorgadas en el año y el resto a subvenciones de años anteriores.

La justificación del gasto es formalmente correcta, si bien no se solicita representante de la IGAE para comprobación de las inversiones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto 1.124/78, de 12 de mayo.

5. Subvenciones gestionadas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Las subvenciones que gestiona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tienen por objeto la financiación de programas supracomunitarios en el campo de la prevención de las drogodependencias y de la asistencia y reinserción social de las personas drogodependientes.

La convocatoria de ayudas tuvo lugar el 4 de enero de 1.990. Concurrieron a la convocatoria 48 entidades, ascendiendo el monto total solicitado a 1.278 millones de pesetas para un fondo disponible de 250 millones, que fueron distribuidos entre 27 entidades. En la Orden de convocatoria (BOE 18/1/90) se establecen los programas que tienen carácter prioritario. La documentación requerida a los solicitantes es adecuada a la finalidad de la ayuda. Los primeros pagos tuvieron lugar con fecha agosto 1.992.

Sin que se integre en el expediente tramitado se exige la suscripción de un convenio a la entidad beneficiaria en el que se fijan las obligaciones de ésta. Por los responsables del Plan se realizan controles sobre ejecución de los programas. La justificación examinada (40% del total) se ha encontrado correcta, con la única salvedad de que no se comprueba si se ha realizado la totalidad del proyecto cuando éste es objeto de financiación parcial (art. 9 O.M. 4/1/90). Pese a esta omisión, en líneas generales la gestión de las subvenciones por la Delegación del Gobierno puede considerarse eficaz y el control que ejerce sobre la aplicación de las subvenciones, bastante riguroso.

En conjunto, del examen de las subvenciones gestionadas por los distintos Centros del Ministerio de Sanidad y Consumo se deduce un cumplimiento generalizado de los principios de publicidad y libre concurrencia en la concesión, y un desigual seguimiento de la justificación que deben aportar los beneficiarios sobre la aplicación de los fondos recibidos. La justificación pendiente a la fecha en que se efectuó la fiscalización (febrero 1.992) era de 105 millones de pesetas[15]. También hay que destacar el considerable retraso con que frecuentemente llegan las ayudas a los perceptores.

III.8.2.- SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Las subvenciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que han sido objeto de fiscalización son las que se detallan:

(en millones de pesetas)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PERCEPTORES O CUENTADANTES	OBLIGAC. RECONC.
19.01.723B.486	Fondo de Promoción de Empleo Sector Aceros Espec.	7.089
	Fondo de Promoción de Empleo Construcción Naval	10.690
	Fondo de Promoción de Empleo Siderurgia Integral.	1.784
	Fondo de Promoción de Empleo Electrodomésticos Línea Blanca.	2.463
19.01.313C.485	Oficina de Gestión de Prestaciones Síndrome Tóxico.	3.843

El propósito de la actuación fiscalizadora ha sido comprobar la gestión de los créditos y el grado de cumplimiento del deber de rendición de cuentas y de la inherente justificación de los fondos. La fiscalización no se ha extendido a la verificación de la contabilidad de las entidades perceptoras.

1. Perceptores directos de las ayudas

Son perceptores directos de las ayudas objeto de esta fiscalización los Fondos de Promoción de Empleo (FPE) y la Oficina de prestaciones del Síndrome Tóxico, los cuales actúan como intermediarios entre la Administración y los beneficiarios de las misma.

Los Fondos de Promoción de Empleo se han constituido al amparo de la Ley 27/84, de 26 de julio, de Reconversión y Reindustrialización y de los distintos Reales Decretos de reconversión, como asociaciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y tienen el carácter de entidades colaboradoras del Instituto Nacional de Empleo, actuando bajo la inspección del mismo.

Las fuentes de financiación de los Fondos están constituidas principalmente por las aportaciones de los trabajadores equivalentes a las indemnizaciones percibidas de la empresa así como por subvenciones y ayudas públicas.*

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene encomendada la gestión de las medidas laborales previstas en los planes de reconversión como consecuencia de las cuales ha canalizado a dichos Fondos las subvenciones objeto de esta fiscalización, estableciendo, mediante Ordenes comunicadas, las normas de gestión de los créditos asignados a estos fines.

La Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico es un órgano de la Administración sujeto a un peculiar régimen de funcionamiento. Según los Reales Decretos 2289/81, de 2 de octubre, y 2448/81 de 19 de octubre, a la Oficina se adscriben todas las dotaciones presupuestarias necesarias para las actuaciones relacionadas con el síndrome tóxico, teniendo competencias para autorizar gastos y ordenar pagos para cumplimiento de sus funciones, lo que le confiere la condición de cuentadante, a tenor del art. 128 del TRLPG. Las prestaciones que gestiona y los gastos de funcionamiento se financian con anticipos de la Tesorería de la Seguridad Social, la cual se resarce posteriormente de los mismos con cargo a los créditos del Estado asignados a estos fines.

2. Gestión de los créditos

a) Créditos para los Fondos de Promoción de Empleo.

La dotación presupuestaria para los Fondos de Promoción de Empleo ha sido de 22.027 millones de pesetas y se ha agotado en su integridad.

El reconocimiento de las obligaciones a favor de los perceptores con cargo a estos créditos se hace mediante resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual tiene por base una solicitud de los interesados acompañada de una memoria, del cierre provisional del ejercicio anterior (1989), y de los estados financieros previsionales del ejercicio 1990 con la estimación del déficit. Los expresados documentos, junto con certificación del registro de los ingresos en contabilidad, se remiten al Tribunal de Cuentas como justificación de las propuestas de pago (documentos OK).*

La expresada justificación puede considerarse suficiente respecto de las cuentas rendidas por el Centro Gestor, si bien debe ser complementada con las cuentas a rendir por los perceptores, las cuales en lugar de previsiones, deben registrar hechos económicos demostrativos de la aplicación dada a las subvenciones recibidas.

---

[15] La documentación justificativa de las subvenciones cuya omisión se denuncia en este proyecto de informe ha sido requerida a la fecha de redacción del mismo encontrándose este Departamento en espera de contestación.

De otra parte, el ciclo administrativo debiera concluir con una liquidación definitiva de las subvenciones otorgadas en el ejercicio ya que los libramientos tienen sólo el carácter de "a cuenta del déficit".

No se acepta la alegación sobre la ausencia de liquidación definitiva, basada en que ésta queda implícitamente recogida en los estados contables de cierre, ya que por ser dicha liquidación el acto final del procedimiento debiera ser objeto de resolución expresa.*

b) Créditos para prestaciones del síndrome tóxico.

Las obligaciones reconocidas en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para estas atenciones han sido 3.843 millones y se ha anulado un remanente de 1.308 millones como consecuencia, según se certifica, de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley PGE para 1.990. La deuda del Estado con la Seguridad Social por este concepto ascendía al 31 de diciembre de 1.990, según las cuentas de la Oficina, a 14.253 millones de pesetas.

En el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el reconocimiento de las obligaciones y propuesta de pago en favor de la Tesorería de la Seguridad Social se hace con base en certificaciones de los pagos efectuados por las Tesorerías Territoriales por cuenta del síndrome tóxico, justificación que puede considerarse suficiente siempre que se rindan cuentas por la Oficina, lo que en el pasado no se ha venido haciendo.

3. Estado de la rendición de cuentas por los perceptores

La falta de remisión de cuentas al Tribunal por los perceptores, pese a estar obligados a ello, hizo que se reclamaran de la IGAE en virtud de lo previsto en el art. 123 del TRLGP que dispone que la rendición ha de hacerse por conducto de dicho Centro.

Dado que la Intervención General[16] consideraba en contestación al requerimiento que el asunto concernía a los propios Centros Gestores de las subvenciones, con fecha 30 de marzo de 1.992 se requieren del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las mencionadas cuentas con sus documentos justificativos y, en su defecto, con certificación expresiva de la Oficina u Organismo en que se encuentren a disposición del Tribunal de Cuentas, según previene el art. 36 de la LFTCu. El 22 de mayo de 1.992 son remitidas todas las cuentas reclamadas, excepto las de la Oficina de Gestión de Prestaciones Síndrome Tóxico, que se remitieron el 3 de julio de 1.992.

No se incluye entre la documentación ninguna expresión o signo que haga referencia al acto de la preceptiva rendición de las cuentas.

Las cuentas del Fondo de Promoción de Empleo del Sector de Siderurgia integral han sido auditadas por la IGAE y las del Fondo de Promoción de Empleo del Sector del Aceros Especiales por una firma privada cuyos respectivos informes se incorporan a aquéllas.

4. Información deducida de las cuentas anuales remitidas por los Fondos de Promoción de Empleo

La sujeción al régimen de contabilidad por razón de la percepción de subvenciones corrientes no implica que el registro de las operaciones haya de acomodarse al Plan General de Contabilidad Pública; no obstante, si se siguen las prescripciones contables del Código de Comercio, las cuentas a rendir debieran ser por lo menos las que en éste se fijan como obligatorias[17] más la información adicional necesaria para mostrar la aplicación o empleo dado a las subvenciones.

En el caso concreto a que se refiere este epígrafe, la información contable adicional a suministrar debe ser la que resulte necesaria para mostrar la insuficiencia financiera producida, ya que en los acuerdos de concesión de las subvenciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el importe de éstas se calcula en función exclusivamente de la previsiones de insuficiencia financiera del ejercicio. A estos efectos, las Ordenes comunicadas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las que se regulan estas subvenciones deberían definir con todo detalle -contrariamente a lo que ocurre, al menos respecto al ejercicio de 1.990- la documentación contable, tanto relativa a previsiones como a realizaciones que deben presentar los Fondos de Promoción de Empleo, no sólo para fundamentar la concesión de las subvenciones sino también para su justificación.

Esta falta de definición puede ser la causa de que las cuentas remitidas al Tribunal, en virtud del requerimiento formulado, no sean idénticas en todos los casos y la información que suministran, en consecuencia, sea también diferente.

Todos los fondos han remitido Balance de Situación y Cuenta de Resultados del ejercicio. La Memoria no es remitida por dos de ellos: Fondo de Promoción de Empleo Sector Construcción Naval y Fondo de Promoción de Empleo Sector Electrodomésticos, Línea Blanca. El Fondo de Promoción de Empleo Sector Aceros Especiales y el Fondo de Promoción de Empleo Sector de Siderurgia Integral incluyen información adicional.

Aunque los expresados estados financieros[18] al margen de la indicada falta de uniformidad no satisfacen enteramente los requisitos propugnados en los párrafos anteriores, de ellos no se deduce la existencia de desajustes entre las insuficiencias financieras que ponen de manifiesto y la cuantía de las subvenciones concedidas.

5. Información deducida de las cuentas anuales remitidas por la Oficina de Prestaciones del Síndrome Tóxico

Las cuentas remitidas son el Balance de situación al 31 de diciembre de 1.990, la Cuenta de Gestión por Operaciones corrientes y diversos Anexos en que se detallan partidas de esta última.

Según la Cuenta de Gestión las transferencias del Estado en el ejercicio han importado 8.516 millones de pesetas. De dicha cifra 3.843 millones se han librado con imputación al Presupuesto de 1.990 y el resto corresponde a transferencias del ejercicio 1.989 hechas efectivas por el Tesoro en febrero de 1.990.

Los gastos satisfechos por la Oficina a los afectados por el síndrome tóxico en el ejercicio 1.990 han ascendido a 4.898 millones y su detalle, en millones se pesetas, es el siguiente:

Pensiones:		1.465
Invalidez permanente	925	
Jubilación	482	
Viudedad	38	
Orfandad	20	
Incapacidad laboral transitoria		37
Invalidez provisional		86
Ayudas por fallecimiento		76
Ayuda económica familiar complementaria		2.839
Ayuda domiciliaria a tareas domésticas		166
Lactancia artificial		1
Ayudas escolares guarderías		1
Ayuda dietética y nutricional		52
Prótesis de apoyo y desplazamiento		17
Reinserción social		11
Farmacia		147
TOTAL		4.898

Hasta el presente ejercicio ni las cuentas ni sus justificantes se venían remitiendo al Tribunal, si bien las operaciones de la Oficina se fiscalizan por un Interventor Delegado. El examen de las mismas pone de manifiesto la existencia de un importante desfase entre el ejercicio en que se realiza el gasto y el de su imputación presupuestaria, contraria al principio general de imputación temporal establecido en el art. 63 TRLGP. A 31/12/90 el gasto realizado pendiente de imputación presupuestaria ascendía a 11.990 millones de pesetas.

III.8.3.- SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA

La fiscalización ha tenido por objeto la gestión de las subvenciones y ayudas concedidas a Empresas privadas arts. 47 y 77 de la clasificación económica de los créditos) y a Familias e Instituciones sin fines de lucro (arts. 48 y 78) para el desarrollo de distintos programas del Ministerio de Cultura.

El examen se ha orientado principalmente a comprobar si se cumplen los principios de publicidad y libre concurrencia en la adjudicación y si se justifica adecuadamente la aplicación de los fondos recibidos por los perceptores. La fiscalización no se ha extendido a la contabilidad de los perceptores sino que se ha practicado sobre los expedientes y cuentas justificativas obrantes en la Administración o en el Tribunal, que en algunos casos han sido requeridos expresamente. Los perceptores en ningún caso han rendido cuentas o estados financieros al Tribunal, pese a estar obligados a ello según se expone en la introducción a este apartado III.8.

1.- Ejecución presupuestaria

La ejecución presupuestaria de los créditos examinados ha sido la siguiente:

(en millones de pesetas)

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% GRADO EJECUCIÓN
Art. 47	139	37	176	111	63
Art. 77	650	(150)	500	476	95
Art. 48	879	34	913	873	96
Art. 78	179	9.106	9.285	9.170	99
T O T A L	1.847	9.027	10.874	10.630	98

El grado de ejecución media es elevado -98%- toda vez que para unos créditos finales de 10.874 millones de pesetas las obligaciones reconocidas se han elevado a 10.630 millones de pesetas.

Las modificaciones presupuestarias son relevantes por la incidencia de dos créditos extraordinarios por un importe conjunto de 9.000 millones de pesetas concedidos por Ley 24/1.990, de 20 de diciembre, con destino a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Si se excluyen éstas las modificaciones netas se sitúan en el 1%.

[16] Sobre las funciones de la IGAE en la rendición de cuentas, este Tribunal ha expresado su criterio en la "Moción derivada de la actividad fiscalizadora sobre justificación y control de subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", aprobada por el Pleno en su sesión de 29 de julio de 1993.

[17] Pese a que no existe previsión legal expresa sobre estos extremos, así ha de entenderse por analogía con lo dispuesto en el art. 138 TRLGP para las Sociedades estatales y Entes Públicos sometidos a la normativa mercantil.

[18] No ha constituido objetivo del presente informe la auditoría de estos estados.

2.- Subvenciones gestionadas por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos

Por este Centro directivo se han gestionado subvenciones que suman en términos de obligaciones reconocidas un total de 77 millones de pesetas si se excluyen los 9.000 millones con destino a la Fundación Thyssen-Bornemisza, cuya incidencia en el ejercicio de ha limitado a la cancelación de anticipos de tesorería por gastos realizados en el anterior.

De la citada cifra de 77 millones de pesetas 40 millones corresponden al programa 452 A "Archivos". Las ayudas tienen por finalidad la realización de trabajos de inventario, catalogación del patrimonio documental, etc. a cuyo efecto se formalizan convenios con las Entidades beneficiarias. En virtud de dichos convenios los datos recopilados por las mismas han de ser enviados al Centro de Información Documental de Archivos para su inclusión en las bases de datos del P.I.C. (Puntos de Información Cultural). Las subvenciones se otorgan sin convocatoria pública y no existen normas específicas reguladoras de la concesión, si bien existe un control adecuado sobre los resultados y la actividad de las entidades beneficiarias.

Al programa 453 A "Museos" se han imputado obligaciones para gastos ordinarios por un importe de 34 millones de pesetas, cifra que sólo representa el 35% de los créditos finales en el artículo 78. Existe una Orden ministerial que regula estas ayudas (O.M. 10/7/89 modificada por O.M. 7/2/90) pero no se hacen convocatorias anuales. Dichas convocatorias no están previstas en las Ordenes de referencia, si bien los criterios de publicidad y concurrencia establecido en el art. 81 TRLGP no pueden considerarse plenamente alcanzados con una regulación permanente, máxime si se considera que los créditos para estas atenciones son variables de unos ejercicio a otros. Los beneficiarios de las subvenciones concedidas han sido el Museo de Ciencias Naturales de Madrid (35 millones), Fundación Miró (35 millones), Fundación Centro Nacional del Vidrio (6 millones) y Fundación Amigos de Serrablo (0,8 millones), pero las obligaciones reconocidas (documento "O") corresponden exclusivamente a la Fundación Miró. Ha quedado un remanente de 25 millones de pesetas sin comprometer que en el Presupuesto aparecía asignado nominativamente a la Fundación Museo Canario.

También se imputan a este programa los 9.000 millones destinados a la Fundación Thyssen-Bornemisza que han tenido por objeto, según la Ley de concesión de los créditos, la constitución del Fondo Fundacional (7.000 millones) y la realización de obras de acondicionamiento del palacio de Villahermosa (2.000 millones). Todo ello a tenor de la cláusula 5.2. (b) VII del contrato de préstamo de la colección Thyssen-Bornemisza de 20 de diciembre de 1.988, en cuya virtud el Estado Español se comprometió a otorgar a la Fundación una dotación inicial de 9.000 millones, que habría de quedar a disposición de la misma.

Finalmente, el programa 458 C "Conservación y restauración de bienes culturales" cuenta con dos créditos para subvenciones nominativas destinadas respectivamente a la "Fundación que gestionará el futuro Instituto Universitario del ICRBC (Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales)" por un importe de 15 millones y 50 millones al Real Monasterio de Poblet. Únicamente aparecen contraídas obligaciones por 3 millones de pesetas en el primero de los créditos que se han destinado a becarios de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes de Roma pese al carácter nominativo del mismo.

Desde el punto de vista de la gestión destaca el considerable retraso con que se contraen las obligaciones, 75 millones en 31 de diciembre y 3 millones en 22 de noviembre, así como el bajo nivel de ejecución (40%) cuya causa radica tanto en demoras en la tramitación de los expedientes como en incumplimientos de los beneficiarios, principalmente por retraso en la aportación de certificaciones de obras financiadas con la subvención.

3.- Subvenciones gestionadas por la Dirección General del Libro y Bibliotecas

Las subvenciones gestionadas por la Dirección General del Libro y Bibliotecas importan en términos de obligaciones reconocidas 778 millones de pesetas.

Las subvenciones concedidas, excepto un pago de cuotas a la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil de escasa cuantía, lo han sido con imputación al programa 455 D "Promoción del Libro y Publicaciones Culturales". Incluye este programa subvenciones a empresas editoriales para reducción de tipos de interés en préstamos, medidas de apoyo a proyectos innovadores y de renovación tecnológica y a la comercialización y difusión del libro. Estas ayudas a empresas han sido objeto de convocatoria pública y han importado 586 millones de pesetas. También ha habido convocatoria pública de las ayudas a la creación literaria en sus modalidades de poesía, narrativa, ensayo y traducción. Se han otorgado doce ayudas de 800.000 Ptas. para cada una de dichas modalidades.

Por el contrario, por un importe de 107 millones, con destino a Instituciones sin fines de lucro, han sido concedidas subvenciones sin previa convocatoria pública. Se trata de las dirigidas a Asociaciones, Academias e Instituciones diversas para realización de estudios sobre problemas del sector y para actividades de tipo editorial y cultural, como edición de guías, organización de congresos, adquisición y microfilmación de fondos bibliográficos, etc.

La existencia de la Orden Ministerial de 24 de febrero de 1984, reguladora de la concesión de subvenciones y ayudas por el Ministerio de Cultura, contrariamente a lo que se aduce en las alegaciones, no justifica la falta de convocatoria pública en estas subvenciones, por las mismas razones que se expresan en el apartado III.8.3.2 anterior, en relación con las subvenciones imputadas al programa 453 A "Museos".*

En relación a la justificación de las ayudas se ponen de manifiesto los siguientes hechos:

a) Faltan por justificar subvenciones por un importe de 2.000.000 Ptas., dado que de 7.500.000 Ptas. que estaban pendientes en el momento de la redacción del anteproyecto, y aunque ello no se indica en las alegaciones, 5.500.000 Ptas. se justifican posteriormente.*

b) La Federación de Gremios de Editores de España, recibe 30 millones que justifica con facturas de estudios y trabajos de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) que a su vez recibe una subvención de 4 millones de pesetas que justifica con factura de una empresa por realización de otros estudios.

No existe comprobación material de estos estudios por parte de la IGAE ni consta, salvo en un caso, que se haya solicitado la designación de representante que la efectúe tal como dispone el art. 2 del RD 1124/1978, de 12 de mayo.

4.- Subvenciones gestionadas por la Dirección General de Cooperación Cultural

Este centro ha gestionado subvenciones por un importe total de 775 millones de pesetas. La fiscalización ha sido de la totalidad.

De la expresada cifra 25 millones corresponden al programa 134 B "Cooperación, Promoción y Difusión Cultural" en el exterior destinándose 3 millones que aparecen en Presupuesto con carácter nominativo, a la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y el resto a ayudas para actividades culturales. Las ayudas que se otorgan sin previa convocatoria pública, van destinadas por lo general a asociaciones culturales para congresos y actividades de proyección internacional y a becas.

Faltan por justificar 534.240 Ptas., dado que, con posterioridad a la redacción del anteproyecto enviado a alegaciones, y según consta en éstas, de los 3.344.240 Ptas. que en aquel momento estaban pendientes, se han justificado 2.810.000 Ptas. Se consideran, por otra parte, inadecuados a la finalidad de la ayuda justificantes por un importe de 650.000 Ptas., subvención que, otorgada para financiar un ciclo de conferencias sobre Mérida Romana, se aplica, de acuerdo con los documentos aportados, a gastos de vigilancia de una exposición, así como a diversos trabajos relacionados con la biblioteca de la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC de Roma.*

Con cargo al programa 455 C "Promoción y Cooperación Cultural" las subvenciones gestionadas han importado 750 millones de pesetas.

Tres de las subvenciones concedidas por un importe de 125 millones tienen carácter nominativo (Fundación Pablo Ruiz Picasso, Asociación Española de Universidades Populares y Rehabilitación Edificio Centro de la Generación del 27) y aparecen justificadas, excepto la última respecto de la que no se han formulado propuestas de pago en el ejercicio por corresponder a obras pendientes de ejecución por el beneficiario, y que no obstante fue contraída en cuentas con base en el acuerdo de concesión.

Las restantes ayudas concedidas importan 625 millones. La principal carencia de estas subvenciones es la falta de convocatoria pública, pese a su importancia cuantitativa. Los destinatarios son frecuentemente entidades cuya finalidad cultural no es exclusiva ni, a juicio de este Tribunal, prioritaria (Fundación Pablo Iglesias, Fundación Cánovas del Castillo, Fundación Ciencia, Democracia y Sociedad, Fundación de Investigaciones Marxistas, Fundación Largo Caballero, UGT, etc.). Más acertadamente en el Presupuesto para 1.992 estas atenciones aparecen en un crédito específico con el texto: "A las Fundaciones y Asociaciones dependientes de partidos con representación parlamentaria para la promoción de actividades relacionadas con el estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural".

Otro grupo importante de beneficiarios lo constituyen Instituciones con las que el Departamento está comprometido en alguna medida en virtud de convenios o por formar parte de los Patronatos u Órganos de Gobierno (Círculo de Bellas Artes, Liceo de Barcelona, Fundación Nacional del Vidrio, Consorcio Madrid 92, etc)

La justificación por los destinatarios no se ajusta a criterios homogéneos, lo cual viene provocado tanto por lagunas en la normativa reguladora de las ayudas como por deficiencias en la gestión administrativa. Las principales deficiencias puestas de manifiesto en este aspecto son las que a continuación se señalan:

a) A partir de la documentación justificativa no es posible conocer si se cumple la condición establecida en el art. 3 de Orden de 7 de marzo de 1.986 por la que se regula el régimen de subvenciones, según el cual éstas deben ir encaminadas a cubrir diferencias en los costes de programas.

Sólo sobre la base de unas cuentas o estados demostrativos de los ingresos y gastos de cada programa podrían conocerse las diferencias citadas. No obstante, no se rinden tales cuentas sino que se aportan normalmente una serie de justificantes por importe igual o superior a la subvención recibida que por sí mismos no demuestran lo que se pretende, máxime si se tiene en cuenta lo que se expone en el párrafo siguiente.

b) Nada dice la Orden reguladora de la concesión sobre si las ayudas deben financiar sólo el coste directo de los programas o si pueden imputarse a éstos alguna fracción de los gastos de

funcionamiento de la Entidad beneficiaria. En ciertos casos se destina una parte muy importante de la ayuda a la financiación de dichos gastos.

De ser admisible la imputación al programa de costes indirectos la justificación no podría consistir en la aportación de una serie de justificantes de gastos generales carentes de todo significado, aisladamente considerados, sino en la consignación de la cifra imputada, como una partida de la cuenta rendida (estado contable) la cual a su vez sólo adquiere sentido a partir de los datos de las cuentas anuales de la Entidad.

c) No hay constancia de los resultados obtenidos con algunas ayudas para programas muy concretos, como un trabajo de investigación y recuperación de cantos de peregrinos, financiado con 10 millones de pesetas.

d) En la actualidad y sin perjuicio de las deficiencias señaladas en la forma de justificar, se carece además de justificación documental del gasto por un importe de 9.176.639 Ptas, tras reducir el importe que quedaba pendiente al redactar el anteproyecto enviado a alegaciones (10.676.639 Ptas.) en 1.500.000 Ptas. justificadas posteriormente y que corresponden a la subvención percibida por la "Real Diputación de San Andrés de los Flamencos. Fundación Carlos de Amberes". Dentro del importe indicado como pendiente de justificar, 4.176.639 Ptas. corresponden a la subvención percibida por la Fundación "Manuel Azaña". Según las alegaciones esta Fundación "no ha podido justificar dicha cifra, al haber sido objeto de sustracción, según se acredita con el escrito de la demanda presentado ante el Juzgado de Instrucción número siete de Madrid". Consta, a este respecto, que la indicada Fundación envió con anterioridad diversa documentación justificativa al Ministerio de Cultura, siendo rechazada por inadecuada. De ello se infiere que la sustracción debe referirse a los justificantes considerados supuestamente como idóneos, lo que, en todo caso, no eximiría de la justificación a través de otros medios alternativos de prueba fiables.*

Finalmente, entre las deficiencias de gestión debe señalarse que no existe un seguimiento adecuado de la ejecución de los programas ni una revisión sistemática de las cuentas justificativas que ni son aprobadas por el Departamento Ministerial ni fiscalizadas por la Intervención Delegada. Tampoco se remiten a este Tribunal por lo que ha habido que reclamarlas expresamente.

Las alegaciones generales relativas a esta parte del Informe dedicada al programa 455 C "Promoción y Cooperación Cultural", no desvirtúan los hechos y valoraciones en él contenidos, siendo necesario subrayar que estas valoraciones no tienen como referencia exclusiva el Decreto 2784/1964, de 27 de julio -en el que no existen los apartados 3.c) y 4.b) citados en las alegaciones- sino toda la normativa reguladora de las ayudas. Debe significarse, de otro lado, que si en el acuerdo de concesión se impone, como se alega, el deber de que las ayudas se destinen a los costes directos de los programas, éste no se cumple con generalidad.*

A partir de lo expuesto en este apartado III.8.3, puede afirmarse que el Ministerio de Cultura no se ha ajustado por lo general a las prescripciones legales sobre publicidad de las subvenciones y que su justificación y control presenta serias deficiencias. De un total de 1.630 millones de pesetas de obligaciones reconocidas (excluidas las de la Fundación Thyssen-Bornemisza) 22 millones aproximadamente quedan pendientes de justificar[19]; parte de la justificación rendida, de otro lado, lo ha sido a requerimiento de este Tribunal. Tampoco los justificantes aportados son siempre idóneos a efectos de acreditar la aplicación de los fondos a sus fines.*

III.8.4.- FISCALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA PARA FINES DE INTERÉS RELIGIOSO Y OTROS

El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, establece el compromiso de sustituir el sistema de consignación en los Presupuestos Generales de dotaciones para el adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica, por un nuevo mecanismo de colaboración financiera consistente en la asignación a la Iglesia de un porcentaje del rendimiento sobre algún tributo de carácter personal.

Este nuevo sistema se instrumenta en la Ley de Presupuestos Generales de 1988 cuantificándose la asignación en el 0,5239% de la cuota íntegra del IRPF, porcentaje que ha permanecido constante.

El importe de la asignación tributaria se destina a la Iglesia Católica cuando así lo indiquen los sujetos pasivos, y a otros fines de interés social en caso contrario.

Se establece un periodo transitorio de tres años (1988, 1989 y 1990) en el que coexiste el sistema de dotación presupuestaria con el de asignación tributaria, de forma que la dotación se minora en el importe de la asignación con cargo al rendimiento del IRPF de cada ejercicio. Durante el periodo transitorio los recursos a favor de la Iglesia no pueden ser inferiores a la dotación de 1987, actualizada anualmente.

Los otros fines de interés social se definen en el RD 825/1988 y RD 195/1989, los cuales establecen además los posibles destinatarios de las subvenciones, así como la normativa reguladora básica que debe presidir la concesión, tramitación y gestión de estas subvenciones. Como órganos gestores de las mismas, se fijan el Ministerio de Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

1.- Ámbito de la fiscalización

Se refiere a las subvenciones concedidas con cargo a los ejercicios 1989 y 1990, con excepción para este último año de las concedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, debido a la no ejecución de los créditos asignados al efecto al no haberse publicado la Resolución aprobatoria de las correspondientes subvenciones hasta el 11 de enero de 1991. La inclusión del ejercicio 1989 obedece al notable retraso con que se produce la justificación de las subvenciones destinadas a otros fines sociales, que se justifican en su mayor parte en 1991 y aún en 1992.

2.- Asignación tributaria y ejecución presupuestaria

Para la determinación de la parte de asignación tributaria que corresponde a la Iglesia Católica en los ejercicios 1989 y 1990, se consideran las declaraciones del IRPF de los ejercicios fiscales 1988 y 1989. Por el contrario, el importe de esta asignación destinado a financiar otros fines de interés social en 1989 y 1990, se obtiene de las declaraciones del Impuesto por los ejercicios 1987 y 1988. Este desfase se origina por la falta de regulación de las subvenciones de este tipo hasta finales de 1988 y principios de 1989 (RD 825/88, RD 195/89).

De acuerdo con la opción mostrada por los contribuyentes para cada uno de los ejercicios citados, la asignación tributaria que sirve de soporte a la ejecución presupuestaria en 1989 y 1990, es la siguiente (en millones de pesetas):

	1.989	1.990
- Iglesia Católica	6.674	8.190
- Otros fines sociales	8.972	7.897

Las dotaciones a favor de la Iglesia Católica, 14.258 millones en 1989 y 15.260 millones en 1990, resultan superiores en ambos ejercicios, 213% y 186%, a la participación que le corresponde por la asignación tributaria, como consecuencia de la aplicación del mecanismo transitorio de financiación fijado en la disposición adicional 5ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Estas dotaciones se han librado íntegramente con cargo a créditos del Ministerio de Justicia (Dirección General de Asuntos Religiosos), sin establecer distinción entre la parte que corresponde a la asignación tributaria, que debería haber sido objeto de minoración en el capítulo 1 del presupuesto de ingresos del Estado, y la parte que constituye la subvención propiamente dicha, que tiene por objeto complementar la aportación íntegra a satisfacer durante el periodo transitorio.

El porcentaje de cobertura de la asignación tributaria con respecto al total dotaciones a la Iglesia Católica evidencia un importante problema de financiación futura, salvo aumentos importantes de las cuotas íntegras, o aumentos en el porcentaje destinado a la asignación tributaria. Si no se cumplen estas hipótesis, no podrá llegarse en un horizonte temporal cercano a la sustitución completa del sistema de dotación presupuestaria prevista en el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, habida cuenta del compromiso asumido por el Estado en el sentido de que el nuevo mecanismo de financiación ha de proporcionar recursos de cuantía similar[20].

En cuanto a las dotaciones de créditos destinados a los fines de interés social, tienen el siguiente detalle (en millones de pesetas):

	1989	1990
- Asignación	8.972	7.897
- Créditos definitivos	8.972	7.088
Diferencia	-	809

Respecto al ejercicio 1989 los créditos iniciales en las aplicaciones 27.01.313L.481 y 12.03.134A.481 ascendían a 1.038 y 50 millones de pesetas respectivamente. Estos créditos son objeto de modificación por expediente de 19 de junio de 1989 por un importe conjunto de 7.884 millones de pesetas. Los créditos definitivos fueron ejecutados en su totalidad.

En el acuerdo de modificación se establece un reparto del importe de la asignación tributaria destinada a fines de interés social mediante el cual se imputa el 85% de la misma al Ministerio de Asuntos Sociales (7.626 millones de pesetas) y el 15% restante al Ministerio de Asuntos Exteriores (1.346 millones de pesetas)[21].

En 1990 la dotación inicial de créditos para fines de interés social en el Ministerio de Asuntos Sociales (capítulos IV y VII) coincide con los créditos definitivos (7.038 millones), siendo las

[19] La documentación justificativa de las subvenciones cuya omisión se denuncia en este proyecto de resultados de fiscalización ha sido requerida a la fecha de redacción del mismo encontrándose este Tribunal en espera de contestación.

[20] La primera modificación se produce en la Ley de Presupuestos Generales para 1991, al fijar como entrega a cuenta a la Iglesia para dicho ejercicio el importe correspondiente a la dotación de 1990 (15.260 millones de pesetas), modificando lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales para 1988, según lo cual los recursos a asignar para 1991 deberían ascender a 8.190 millones de pesetas.

[21] La suma de los importes subvencionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores según figura en la Resolución de 19/12/89, excede en 3 millones de pesetas al importe de los créditos definitivos. La reducción se aplica al programa de "Seguimiento de Proyectos".

obligaciones reconocidas de 7.030 millones de pesetas. Los créditos definitivos superaron en 326 millones al importe que correspondía por aplicación del 85% de la asignación tributaria.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores la dotación inicial, que ascendió en 1990 a 50 millones de pesetas, no tuvo ejecución en dicho ejercicio dado que la Resolución por la que se conceden las correspondientes subvenciones no se publicó hasta el 11 de enero de 1991, pese a que dicha Resolución tiene fecha de 29 de noviembre de 1990. El importe al que debieron ascender los créditos definitivos en este Ministerio es de 1.185 millones de pesetas, por apliçación del 15% de la asignación tributaria.

De la comparación entre el importe de la asignación tributaria y el de los créditos definitivos se deduce que no se incluyeron, en el presupuesto de 1990, 809 millones, diferencia entre el defecto y exceso de dotación en los Ministerios de Asuntos Exteriores y Asuntos Sociales, respectivamente, a que se ha hecho referencia en los dos párrafos precedentes.

3.- Adjudicación de subvenciones

Las aportaciones a favor de la Iglesia Católica se recogen en créditos nominativos justificándose su aplicación en los términos a que se refiere el Protocolo adicional al Acuerdo de 3 de enero de 1979.

La adjudicación de las subvenciones para otros fines de interés social se realiza mediante convocatoria anual publicada mediante Orden Ministerial. La valoración de los proyectos de las entidades que concurren a la convocatoria se efectúa por comisiones creadas al efecto[22], cuya evaluación constituye el soporte de las Resoluciones que se publican en el BOE y en las que se identifican las entidades subvencionadas y el importe de la subvención.

De las comprobaciones efectuadas sobre el cumplimiento de los requisitos previos exigidos a las entidades y programas que concurren a las subvenciones se deducen las siguientes observaciones:

A) Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según se desprende de la Resolución publicada en el BOE sobre las ayudas concedidas, así como de los correspondientes Convenios-programa, una parte considerable de las subvenciones se asigna de forma conjunta a grupos de entidades. Sin embargo, las propuestas de gasto y los documentos contables a los que acompañan se emiten a nombre de una sola entidad, sin especificar, por consiguiente, el importe que corresponde a cada una de las integrantes del grupo y sin que conste que para las no incluidas en la propuesta de gasto se haya verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos a los perceptores de subvenciones.

Esta situación determina que aunque nominalmente resulte como obligado a justificar un solo perceptor, en la práctica esta obligación debería extenderse a una pluralidad de ellos y por los importes que internamente hayan decidido asignarse.

B) Ministerio de Asuntos Sociales

a) Convocatoria de 1989

La Orden Ministerial correspondiente, al igual que el párrafo primero del artículo 3 del RD 195/1989, establece que las subvenciones a conceder se destinarán a financiar programas de "ámbito estatal". Pese a ello, se concedió a la Entidad Solidaridad Internacional una subvención por importe de 89,7 millones de pesetas para la adquisición de un inmueble en Lima (Perú) destinado a albergar un Centro Español, sin que resulte aceptable la alegación, a este punto, por cuanto el "ámbito estatal" hay que entenderlo referido al del territorio del Estado Español, restricción que parece adecuado que se establezca al Ministerio de Asuntos Sociales, teniendo en cuenta que las eventuales acciones en el extranjero pueden canalizarse a través del de Asuntos Exteriores.*

b) Convocatoria de 1990

b.1) Se adjudica a la "Asociación de Padres de Niños Autistas" una subvención por importe de 23 millones de pesetas sin que esta entidad acreditase encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social. Contra esta subvención se han reconocido obligaciones por importe de 15 millones de pesetas, si bien, no se ha efectuado la correspondiente propuesta de pago.

b.2) Se adjudican subvenciones a diversas entidades tales como Asociaciones de vecinos, Consejo de la Juventud de España, Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA, Movimiento Scout Católico y Unión General de Trabajadores que no resultan fáciles de enmarcar en el perfil de las entidades destinatarias de la asignación tributaria, cuya finalidad institucional primordial debe ser la realización de actividades de cooperación y voluntariado social en favor de colectivos marginados.

No se aceptan las alegaciones a este punto b.2) porque el inciso "y demás actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad" incluido, en los Reales Decretos 825/1988 y 195/1989, tras una amplia enumeración de las situaciones específicas de marginación y desamparo a las que deben atender estas subvenciones, debe entenderse referido a situaciones de similar naturaleza y no como una ampliación del destino de dichas subvenciones a finalidades distintas, como son las que persiguen las entidades aludidas. Esta posible desviación de objetivos se hace más patente si se tiene en cuenta que, según consta a este Tribunal, la insuficiencia de recursos asignados presupuestariamente obligó a rechazar la subvención de numerosos programas propuestos por entidades que, a juicio del Tribunal, tienen como funciones primordiales la realización de actividades a las que se refieren expresamente los Reales Decretos citados.*

b.3) La Orden Ministerial de convocatoria amplía el ámbito de posibles beneficiarios por encima de los definidos en el artículo 3 del RD 195/1989, introduciendo en el mismo colectivos de mujeres, infancia y jóvenes, sin que se les exija situaciones de marginación o desamparo especiales. Esto ha permitido que, por ejemplo, se conceda una subvención de 160 millones de pesetas a la Federación de Mujeres Progresistas con objeto de cumplir los siguientes programas, que, al margen de cualquier juicio sobre los mismos no parecen prioritarios en relación a los fines perseguidos por la asignación tributaria, pues, en contra de lo que podría deducirse de las alegaciones, en el correspondiente Convenio-Programa no se exige, en ningún caso, que las beneficiarias se encuentren en situación de dificultad social, económica, laboral o de cualquier otra índole:*

- Creación de un centro en que "se proyectarán diversos tipos de actividades formativas y de difusión, debate e investigación, encaminadas a incrementar la cualificación profesional y personal de las mujeres". El importe subvencionado asciende a 48 millones de pesetas, al que habría que añadir el coste de una subvención encubierta consistente en la cesión a largo plazo de un local por parte del Ministerio, si bien, como se hace constar justificadamente en las alegaciones dicha cesión no llegó a producirse y el importe subvencionado fue reintegrado en su totalidad.*

- Programa "Mujeres en Ruta" destinado a informar a mujeres del ámbito rural sobre necesidad de participación, derechos y deberes constitucionales, puericultura, higiene, sexualidad, etc. El coste del programa asciende a 58,3 millones de pesetas de los cuales 34 millones se destinan a la adquisición y dotación de un autocar para la realización del programa.

- Casa de oficios para mujeres con objeto de recuperar tradiciones artesanales y realización de cursos sobre utilización de nuevas tecnologías. Los cursos que se subvencionan son: bordado mallorquín, artesanía de trabajo en barro y vidrio soplado, cooperativismo, informática e idiomas, así como aulas de debate sobre salud, consumo, etc. El coste del programa es de 23,7 millones de pesetas.

- Servicio de cuidado de niños a domicilio que permita una mayor participación de las mujeres en actividades sociales y culturales. El coste del programa asciende a 30 millones de pesetas.

4.- Control de ejecución de los programas subvencionados

Las Ordenes de convocatoria del Ministerio de Asuntos Sociales, no así las referentes al Ministerio de Asuntos Exteriores, establecen expresamente la posibilidad de interponer recurso contra las Resoluciones de concesión de subvenciones. Las resoluciones de los recursos son uniformes y constantemente basadas en la limitación de créditos presupuestados.

Los compromisos asumidos por los beneficiarios de las subvenciones se plasman en un Convenio cuyo seguimiento por parte de la Administración se concreta, en el caso del Ministerio de Asuntos Sociales, en las actuaciones de la Inspección de Servicios del Departamento y, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el control que ejercen determinadas Organizaciones no gubernamentales contratadas al efecto con cargo a créditos de la asignación tributaria, hecho éste que conculca la normativa reguladora de estas subvenciones al afectar créditos a la financiación de actividades de inspección o control que deberían realizarse por la propia Administración, o financiarse con otro tipo de dotaciones.

Para 1989 las dotaciones presupuestarias se incluyen únicamente en el capítulo 4 (transferencias corrientes). Sin embargo, en los Convenios programas suscritos por el Ministerio de Asuntos Sociales se observa que al menos 2.501 millones de pesetas (32,8% del total subvencionado) se afectan a la adquisición de inmuebles y otro tipo de elementos de activo fijo cuya financiación no resulta procedente con cargo a subvenciones de naturaleza corriente. Esta forma de actuar supone un incumplimiento por parte del Ministerio de la obligación de afectar los créditos a la finalidad para la cual fueron autorizados por la correspondiente Ley de Presupuestos. No se aceptan las alegaciones formuladas a este punto, porque, de acuerdo con el Código en que se definen las rúbricas presupuestarias (Resolución de 3/5/84 de la D.G. de Presupuestos) las transferencias corrientes (capítulo 4) están destinadas a financiar operaciones corrientes, debiendo subrayarse, por otra parte, que, a partir del ejercicio 1990, se dotan créditos en el Capítulo 7 para las referidas atenciones, lo que hubiera sido innecesario si fuera acertada la opinión expresada en dichas alegaciones.*

De la lectura de los informes de la Inspección de Servicios del Ministerio de Asuntos Sociales en su función de control de ejecución de los programas, se desprende que con alguna frecuencia las actividades efectivamente realizadas por las entidades subvencionadas guardan escasa relación con las que se comprometieron a ejecutar en los correspondientes Convenios. Asimismo, se comprueba de forma continuada la existencia de retrasos notables en los plazos de ejecución fijados por la Administración.

[22] Aunque de hecho la correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores no se crea hasta marzo de 1990.

Estos retrasos evidencian graves problemas de gestión por los subvencionados debido, por una parte, a que un gran número no tiene establecida una infraestructura básica que les permita administrar en tiempo determinado un volumen de subvenciones que en ocasiones es muy significativo en relación a los recursos de que normalmente disponen y, por otra parte, a que los proyectos que se presentan para ser subvencionados están frecuentemente poco elaborados, por lo que su puesta en marcha requiere periodos de maduración superiores a los plazos de ejecución pactados en los Convenios.

Del seguimiento efectuado sobre los programas financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores no puede concluirse la existencia de desviaciones en el cumplimiento de objetivos, ya que éstos no figuran, en general, explicitados de forma concreta en los correspondientes Convenios; por otra parte, los plazos de ejecución de los programas gozan de una flexibilidad prácticamente total.

Como consecuencia de ello, los informes de control se limitan a manifestar las actividades efectivamente realizadas por los subvencionados, sin que se pongan de manifiesto cuestiones significativas salvo la eventual falta de remisión de los preceptivos informes de ejecución semestrales, hecho que afecta particularmente a Cruz Roja Española.

5.- Justificación de gastos

Como se expone en los puntos siguientes, la situación justificativa en que se encuentra una parte significativa de los perceptores de subvenciones libradas en 1989, así como la práctica totalidad de los que percibieron ayudas en 1990, ha imposibilitado su adecuada fiscalización lo que ha hecho que ésta se prorrogue, incluyéndola en los programas de actuaciones de este Tribunal para el ejercicio de 1991.

Las cuentas de los perceptores o beneficiarios de las subvenciones no han sido remitidas a este Tribunal, por lo que la fiscalización se ha realizado tomando como base la documentación que obra en los correspondientes expedientes de los Centros Gestores, así como en informaciones adicionales solicitadas a los mismos.

A) Ministerio de Asuntos Sociales

La Orden de convocatoria correspondiente a 1989 establecía como plazo para la justificación el primer trimestre de 1990, dicho plazo se modifica por Orden de 18 de septiembre de 1989 que lo amplía hasta el 30 de septiembre de 1990. A dicha fecha, sólo 15 de un total de 37 beneficiarios habían aportado justificantes totales o parciales de la subvención recibida. Al cierre de la presente fiscalización (junio de 1992), quedan por justificar, en todo o en parte, las subvenciones concedidas a beneficiarios -Grupo formado por cinco entidades benéficas[23], Cruz Roja Española, Fundación Psico-Ballet Maite León y Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas-, por importes de 682,5, 3.034, 210 y 258,4 millones de pesetas, respectivamente, que suponen, en conjunto, el 54,9% del total de subvenciones de 1989.

Para 1990 la Orden de convocatoria no fija plazos de justificación, estableciéndose éstos en los correspondientes Convenios-programas. Como norma general, la justificación debería presentarse antes del 30 de noviembre de 1991. A esta fecha, de un total de 79 beneficiarios, habían presentado justificación total o parcial de la subvención recibida 54, número que se amplía, a la fecha del cierre de esta fiscalización, hasta 71 entidades.

A esta última fecha se han considerado como válidas por el Centro Gestor las justificaciones presentadas por tres entidades, estando en fase de revisión o pendientes de revisar por las unidades correspondientes del Ministerio el resto de las documentaciones justificativas.

Dada esta situación, la fiscalización de los justificantes de gasto se ha limitado al examen de una muestra de expedientes de entidades subvencionadas con cargo al presupuesto de 1989, así como al análisis de la situación en que se encuentran las entidades que aún no han justificado gastos por subvenciones correspondientes a dicho ejercicio.

A.1) De las comprobaciones efectuadas se desprenden como hechos más significativos, los siguientes:

a) En la mayor parte de los casos la documentación justificativa no se acompaña de relaciones valoradas de facturas u otros documentos agrupados y sumados por programas que haga posible una revisión más eficiente; ello acarrea problemas adicionales a las unidades del Ministerio encargadas de estas tareas, que además, se encuentran insuficientemente dotadas de medios.

b) Las Memorias, documentos que deben presentarse para acreditar la aplicación a actividades concretas de los fondos percibidos, al no tener reglamentada su estructura, son de contenido heterogéneo refiriéndose en gran parte de los casos a actividades generales de las entidades subvencionadas, y en otros, respondiendo más a declaraciones de intenciones que a resultados conseguidos. Todo ello conlleva que sólo en contadas ocasiones puedan extraerse conclusiones válidas respecto a la consecución de los objetivos que la subvención pretendía financiar.

c) No existe un sistema de comunicación fluido que permita a las unidades encargadas de requerir y revisar la documentación justificativa conocer los informes emitidos por la Inspección de Servicios, o los aplazamientos o modificaciones de programas que haya podido autorizar la Subsecretaría del Departamento. Esto origina que dichas unidades ignoren, en ocasiones, si se han sobrepasado o no los plazos de ejecución de los programas y en consecuencia si procede exigir los correspondientes justificantes, o en qué medida los justificantes aportados responden a realizaciones efectivas que hayan podido ser contrastadas por la Inspección.

d) No existe en la normativa reguladora de estas subvenciones referencia a las aplicaciones de los reintegros que se produzcan, pese a que su importe puede resultar significativo (95 millones de pesetas al cierre de esta fiscalización, de los cuales 48 millones corresponden a la convocatoria de 1990). En este sentido, puesto que el importe de la asignación tributaria debe considerarse como un ingreso afectado a finalidad concreta, los reintegros efectuados deberían reponer crédito a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del TRLGP.*

e) Las entregas de fondos a los perceptores de las subvenciones se libran en firme, en un solo pago previo al comienzo de la ejecución de los programas. Estas entregas anticipadas, en tanto que se materializan en gastos concretos, son suceptibles de generar rendimientos financieros para los que no existe un sistema normalizado que permita cuantificarlos. Ello provoca que sólo en contadas ocasiones se tenga conocimiento de estos posibles rendimientos y se proceda a exigir su reintegro o su reinversión en gastos afectos al programa que se subvenciona[24].

f) La mayor parte de las entidades cuyas subvenciones o parte de ellas se apliquen a la adquisición de bienes inventariables incumplen el art. 14 de la Orden de Convocatoria, al no presentar con la documentación justificativa la certificación del representante de la entidad de la incorporación de las adquisiciones al inventario de la misma.

g) Parte de los gastos de alguno de los programas se han efectuado fuera de los plazos de ejecución establecidos sin contar con la autorización pertinente del Ministerio. Posteriormente las entidades afectadas han solicitado dicha autorización, sin que a la fecha de cierre de la fiscalización hubieran recibido respuesta alguna, como son: "Federación Española de Deportes para Minusválidos Físicos" por 2.004.788 Ptas., "Confederación de Asociaciones de Vecinos de España" por 8.372.660 Ptas., "Asociación de Profesionales de Comunidades Terapéuticas para Toxicómanos" por 31.048.026 Ptas.

h) En algunos casos se han admitido por el Ministerio, justificantes que adolecen de diversos defectos:

- La "Asociación Española Prestadora de Servicios para Minusválidos Psíquicos" (ANDE) presentó facturas por alquiler de locales por importe de 4.200.000 Ptas., así como por adquisición de material y maquinaria cuya cuantía asciende a 33.568.263 Ptas., sin que en dichas facturas se incluya el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), incumpliéndose lo dispuesto en el Real Decreto 2402/85; sin embargo, el Ministerio, según ha acreditado en las alegaciones, ha puesto este hecho en conocimiento de la Administración Tributaria. De estas últimas facturas, además, en la nº 2736/89 expedida por CRUZ-DUQUE, S.A., por importe de 12.743.710 Ptas., contrariamente a lo que se afirma en las alegaciones, no se acredita haber efectuado el correspondiente pago en la forma habitual, si bien se ha aportado un certificado que, dadas las especiales circunstancias derivadas de la desaparición de la empresa suministradora, puede considerarse a estos efectos suficiente.*

- En la subvención a favor de la "Asociación de Profesionales de Comunidades Terapéuticas para Toxicómanos", parte de las facturas que soportan el gasto figuran a nombre de un tercero. El pago por parte de la Asociación se acredita mediante recibos a favor de dicho tercero, emitidos sin ninguno de los requisitos legales exigidos a las facturas. No se comparte la afirmación, contenida en las alegaciones, de que las facturas inadecuadas a que aquí se hace referencia, constituyan un exceso de justificación sobre el importe subvencionado, porque, excluidas aquéllas, los restantes justificantes alcanzan la cifra de 61.465.796 Ptas. frente a una subvención de 62.265.000 Ptas., con una diferencia, por tanto, de 799.204 Ptas. Carece, por otra parte, de sentido que, siendo innecesarias, se aporten como justificación facturas que se consideran incorrectas.*

- La "Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España" (COCEMFE), con subvenciones por importe de 431 millones de pesetas, de los cuales ha reintegrado por diversos conceptos, durante el mes de marzo de 1992, 36 millones de pesetas, incluye entre sus justificantes de gastos dos contratos por prestación de servicios por importe conjunto de 6,9 millones de pesetas suscritos a favor de una empresa cuyo representante era a su vez Director-Gerente de COCEMFE.

Por otra parte, entre los justificantes, incluye el pago de 1 millón de pesetas por la elaboración de un estudio de viabilidad de agencias de viaje para minusválidos, cuyo contenido es prácticamente idéntico al Reglamento de agencias de viaje aprobado por Decreto 216/87 de la Comunidad de Madrid. Asimismo con cargo al programa de fomento asociativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se han cargado gastos por estancias y viajes en

[23] Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Personas Deficientes Mentales (FEAPS), Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE), Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS) y Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE).

[24] Esta situación se corrige de alguna manera en la Orden de Convocatoria de 19 de febrero de 1992, en la cual se establece que el ingreso de la subvención se efectúe en una cuenta bancaria específica, contra cuyo saldo se irán haciendo efectivo los correspondientes gastos

Tenerife por importe aproximado de 5 millones de pesetas, sin que estos gastos tengan aparentemente ninguna relación con el programa que se pretendía financiar.

De las alegaciones parece deducirse que, en el reintegro de los 36 millones antes citado estarían incluidas las partidas de gasto aludidas en los dos párrafos anteriores, extremo que, al no haberse acreditado, se está comprobando dentro de la fiscalización a que se hace referencia al principio del apartado III.8.4.5 anterior.*

A.2) En relación a las entidades que tienen pendiente de aportar en todo o en parte la documentación justificativa, su situación es la siguiente:

a) "Fundación Psico-ballet Maite León", con una subvención de 210 millones de pesetas, tiene prorrogado el plazo de ejecución del programa subvencionado hasta el 30 de diciembre de 1992.

b) La "Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas" subvencionada con 258,4 millones de pesetas, tiene pendiente de justificar ingresos financieros por importe de 22 millones de pesetas, que, según manifiestan, han aplicado a programas subvencionados por la convocatoria de 1991, aplicación que, de acuerdo con las alegaciones, está autorizada.*

c) Cruz Roja Española tiene concedidas subvenciones por importe de 3.034 millones de pesetas. Hasta el momento sólo ha presentado los justificantes de gastos correspondientes a las Asambleas de Madrid y Barcelona, quedando pues por presentar las del resto de Asambleas provinciales. Según manifestó, en su día, la propia Cruz Roja, tenía pendiente de reintegrar 53,7 millones de pesetas, importe que no había sido ingresado en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a pesar de haber sido requerido a ello por el Ministerio. De acuerdo con las alegaciones, posteriormente, con fecha 19 de noviembre de 1992, dicha Entidad reintegró al Tesoro Público 54.936.908 Ptas.*

d) Agrupación de entidades formada por la ONCE, FEAPS, COCEMFE, FIAPAS, CNSE, con una subvención concedida de 682,5 millones de pesetas que, por su singularidad, se analiza específicamente en el apartado III.8.4.6 siguiente.

B) Ministerio de Asuntos Exteriores

Al cierre de la fiscalización, los proyectos financiados con cargo a la Convocatoria de 1989, presentan la siguiente situación:

- Catorce proyectos concluidos y remitida la correspondiente justificación.

- Nueve proyectos concluidos, pendiente de recibir justificación.

- Catorce proyectos no concluidos.

Cuantitativamente, en porcentaje del total de fondos librados por el ejercicios 1989, los proyectos concluidos y justificados representan el 23%, los concluidos y no justificados el 15% y los no concluidos el 62%. Como ya se ha mencionado anteriormente, estos proyectos no tienen propiamente un plazo de ejecución definido, consistiendo el compromiso asumido por los beneficiarios en la aportación de los correspondientes justificantes dentro de los dos meses siguientes a la finalización del proyecto.

Del examen de la documentación justificativa aportada destaca como más significativo, lo siguiente:

a) Una parte sustancial de los justificantes está constituido por recibos, facturas u otros documentos que si bien no son formalmente perfectos pueden considerarse razonables habida cuenta de su pequeño importe y de los lugares y situaciones en que se ejecutan los programas.

b) Programa de ayuda al pueblo saharauí, gestionado por Solidaridad Democrática, consistente en el suministro de placas de energía solar por importe de 11 millones de pesetas. La factura justificativa no especifica individualizadamente el material adquirido, y no existe documento acreditativo de la recepción en el lugar de destino.

c) Suprimido

d) Proyecto denominado "Identificación ONGS y caracterización de espacios para la cooperación no gubernamental en Palestina", subvencionado con 1 millón de pesetas. La ayuda se ha destinado al pago de dietas y gastos de viaje a diversas personas para la realización de un estudio sobre la situación política en Palestina, sin que se aporte copia de dicho estudio que debía constituir el objeto de la subvención.

e) "Proyecto de salud integrado en el programa de desarrollo agropecuario en la población campesina de Mizque", a ejecutar por Médicos sin Frontera y dotado con 15,7 millones de pesetas. La remuneración de parte del personal médico y ATS consiste en el pago de gratificaciones mensuales, sin que se aporten contratos de trabajo.

f) Ayuda a El Salvador, dotado con 134 millones de pesetas. La subvención se libra a favor de INTERMON. Sin embargo tanto la Resolución aprobatoria de las ayudas como el correspondiente Convenio-Programa, establecen como destinatarios a la propia INTERMON así como a IEPALA, Cáritas Española, Manos Unidas, Fundación Codespa, Entrepueblos, Cruz Roja Española, CIDOB y Las Segovias.

La gestión real y la justificación aportada es la siguiente:

- Cáritas Española gestiona 33,5 millones de pesetas, aportando como justificante, únicamente, el movimiento bancario a favor de Cáritas El Salvador.

- Cruz Roja Española gestiona 33,5 millones de pesetas, aportando como único justificante certificado del Comité Internacional de Cruz Roja indicando que se ha realizado el envío de la ayuda a El Salvador.

- INTERMON gestiona 33,5 millones de pesetas a través de la Compañía de Jesús en el Salvador y otras organizaciones salvadoreñas. La justificación se acredita solamente por transferencias a pequeñas asociaciones, iglesias y cooperativas de carácter local.

- IEPALA, Entrepueblos y Las Segovias, gestionan respectivamente 9,5, 9,5 y 14,5 millones de pesetas, habiendo aportado los correspondientes justificantes de los gastos directos incurridos.

6.- Análisis específico de la subvención concedida a la agrupación formada por la ONCE, FEAPS, COCEMFE, FIAPAS, CNSE[25]

a) Concesión de la subvención

Por resolución del Ministerio de Asuntos Sociales de 15/6/89 (BOE de 26/7/89), se concede a la agrupación de entidades Fundación ONCE S.A. (FUNDOSA), Confederación Española de Federaciones Asociaciones Pro-Personas Deficientes Mentales (FEAPS), Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE), Federación Ibérica de Asociaciones de Padres de Amigos de los Sordos (FIAPAS) y Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), una subvención con cargo a la asignación tributaria del IRPF de 682,5 millones de pesetas. Con fecha 22/11/89 se publica en el BOE una corrección de errores de dicha Resolución, consistente en la sustitución de FUNDOSA por la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE). A pesar de dicha sustitución, FUNDOSA ha ocupado, como se observa posteriormente, un lugar significativo en la gestión de la subvención percibida por la agrupación de entidades.*

En las memorias que presentan las entidades citadas para solicitar la correspondiente subvención, establecen como finalidad de ésta la constitución e implantación de una sociedad anónima destinada a realizar diversas actividades de interés social.

El hecho de que el beneficiario, aún indirecto, fuera una Sociedad Anónima que por su propia naturaleza se presume persigue la obtención de lucro y que por ello no podría ser perceptor de ese tipo de subvenciones según dispone el art. 2º del Real Decreto 195/1989, dio lugar a que en el informe de la Comisión Evaluadora que propuso la adjudicación se cite, en apoyo de la propuesta, un dictamen emitido al respecto por el Servicio Jurídico del Departamento. En él, de acuerdo con la referencia que aparece en el indicado informe, se sostiene que no existía inconveniente en conceder la subvención siempre que las entidades de carácter social invirtiesen los beneficios resultantes en los fines sociales previstos en el artículo 3º del citado Real Decreto, añadiendo, que en los Estatutos de la Sociedad debería limitarse la libre disponibilidad de las acciones, para garantizar que éstas estuvieran, en todo caso, en manos de entidades sin ánimo de lucro destinadas a fines semejantes a los que justificaron la concesión de la subvención. El Convenio-Programa suscrito, sin embargo, tan sólo recoge esta última cautela.*

En relación con las alegaciones a este apartado 6.a), que, en todo caso, han dado lugar a que en él se introduzcan algunas matizaciones, es conveniente precisar lo siguiente:

Las afirmaciones que aparecen en ellas, en el sentido de que la inclusión inicial de FUNDOSA como beneficiaria de la subvención obedeció a un error de transcripción y de que en ningún momento hubo intención por parte del Ministerio de Asuntos Sociales de subvencionar a dicha entidad, en nada contradicen la realidad de los hechos objetivos puestos de manifiesto en este Informe respecto a la participación de FUNDOSA en la gestión de la subvención.

- Al margen de cuál fuese el criterio del Servicio Jurídico del Departamento sobre las cautelas que debían adoptarse y el contexto de su formulación (en el texto se resume simplemente la cita que sobre tal criterio aparece en el informe de la Comisión Evaluadora antes citada [26]), lo cierto es que en el Convenio-Programa referido sólo se recoge una de las cautelas señaladas, y así se expresa en el párrafo alegado, sin que pueda inferirse de ello que se afirme en dicho párrafo que no se ha seguido la opinión del Servicio Jurídico del Departamento.*

[25] Para la fiscalización de esta subvención, se solicitó ampliación de datos al Ministerio de Asuntos Sociales el 26 de junio de 1992, contestada con fecha 31 de julio; la información recibida se ha utilizado en la elaboración de este apartado.

[26] Se expresa literalmente en dicho Informe: "Ante la complejidad del Programa, y para el análisis de su viabilidad legal, la Presidenta de la Comisión encargó al Gabinete de la Subsecretaría la práctica de una información conducente a facilitar a los miembros de ésta la valoración del Programa objeto de subvención. El referido Gabinete procedió: A) A requerir informe del Servicio Jurídico del Departamento, sobre la posibilidad legal de subvencionar a una Sociedad Anónima, tanto de forma directa como a través de las organizaciones solicitantes de la subvención.

El servicio Jurídico del Estado emitió dictamen poniendo de manifiesto, la posibilidad de ser destinatario de subvenciones siempre que las entidades que desarollen actividades de carácter social inviertan los beneficios resultantes en los fines sociales previstos en el artículo 3º del Real Decreto 195/1989 añadiendo, en consecuencia, que en los Estatutos de la Sociedad debería limitarse la libre transmisibilidad de las acciones, para garantizar que éstas estén, en todo caso, en manos de entidades sin ánimo de lucro destinadas a fines semejantes a los que justificaron la concesión de la subvención.*

b) Convenio-Programa y constitución de la sociedad

Este Convenio que constituye el marco regulador de los compromisos y obligaciones asumidos por el subvencionador y subvencionado, se formaliza el 27/9/1989. De acuerdo con él, la subvención tiene por objeto permitir la creación de una entidad con personalidad jurídica de sociedad anónima, que tendrá por objeto social la realización de actividades comerciales y de distribución de productos elaborados en centros ocupacionales, centros especiales o en empresas ordinarias que den empleo a personas con minusvalías, así como facilitar su implantación y actuación.

Las entidades subvencionadas se comprometen a constituir la sociedad en un plazo de cuatro meses, desembolsando, al margen de la subvención percibida, las participaciones en el capital social que se cifra en 10 millones de pesetas, según la siguiente distribución:

ONCE	2.500.000
COCEMFE	2.500.000
FEAPS	2.500.000
FIAPAS	1.250.000
CNSE	1.250.000

La nueva sociedad, con la denominación de Comercializadora S.A., se constituye el 1 de marzo de 1990. En su constitución, así como en el contenido de sus estatutos sociales, se vulnera el compromiso asumido en el Convenio-Programa, en los siguientes aspectos:

- Se admite un nuevo socio, FUNDOSA, con un capital suscrito de 1 millón de pesetas.

- Se altera la participación social de las entidades subvencionadas, reduciéndose en la parte proporcional a la aportación del nuevo socio, de forma que el capital social coincida con el exigido en el Convenio-Programa. De dicho capital social se desembolsó únicamente el 25% pese a la exigencia de desembolso total establecida en el Convenio.

La pretensión de FUNDOSA de participar en la sociedad creada, era conocida por la Administración ya que así figuraba en las memorias presentadas por las entidades para concurrir a la convocatoria de subvención. Además, la participación de FUNDOSA y su actuación en Comercializadora S.A. estaba previamente acordada por las distintas entidades en un documento suscrito en 14 de abril de 1989, cuyo cumplimiento ha prevalecido, en la práctica, sobre las exigencias del Convenio-Programa.

- En los Estatutos iniciales de Comercializadora S.A. no consta, como así se exige en el Convenio-Programa, limitación a la transmisión de acciones que sólo podrían efectuarse a entidades sin ánimo de lucro. En este sentido, la propia admisión de FUNDOSA constituye una vulneración a esta prohibición.

- El Convenio-Programa contempla asimismo un plan de disposición de las cantidades subvencionadas que deben aplicarse a determinadas finalidades previo acuerdo mayoritario de los socios fundadores. Esta prevención no se contempla en los estatutos sociales que otorgan al Consejo de Administración plena soberanía en esta materia. Además, esta disposición de fondos debería efectuarse a través de la cuenta corriente receptora de las subvenciones, sin que en la misma figurasen como titulares los representantes legales de COCEMFE y CNSE-FIAPAS.

El Ministerio de Asuntos Sociales conocía estos incumplimientos del Convenio, que con una interpretación rigurosa del mismo podrían haber ocasionado la exigencia del reintegro total de las cantidades subvencionadas; sin embargo no ha realizado actuación alguna en este sentido, permitiendo la corrección paulatina de estos incumplimientos, que Comercializadora S.A. inició mediante una serie de actuaciones encaminadas hacia una mayor adaptación al Convenio-Programa.

En este sentido los primitivos estatutos sociales han sido objeto de diversas modificaciones; así, por Junta General Extraordinaria de accionistas de 11 de noviembre de 1991, se acuerda el desembolso del capital social pendiente, que se materializa en el mes siguiente. Se acuerda la venta de las acciones de FUNDOSA S.A. al resto de los socios, transacción que se realiza el 24 de julio de 1992. Asimismo, se modifica el objeto social y se fijan restricciones a la libre transmisión de acciones.

Pese a las correcciones efectuadas en los nuevos Estatutos, subsiste en éstos la posibilidad de emisión de obligaciones convertibles que indirectamente pueden propiciar la entrada de nuevos accionistas, no necesariamente entidades sin fin de lucro, que como tales socios tendrían derecho al reparto de los beneficios sociales que eventualmente pudieran generarse.

El libramiento de las subvenciones se efectúa individualizadamente a cada una de las Entidades beneficiarias, las cuales deberían ingresar su importe en una cuenta corriente conjunta abierta a tal fin. El ingreso efectivo de los fondos se produce, en algunos casos, con un cierto retraso, lo que ha propiciado su utilización discrecional por el tiempo transcurrido entre la recepción del importe subvencionado y su ingreso material en la citada cuenta.

No se aceptan las alegaciones formuladas a este apartado 6.b) en la parte que discrepan del contenido del Informe, porque, si bien es cierto que las desviaciones de los estatutos sociales respecto al Convenio-Programa puestas de manifiesto en el Informe no suponen "per se" que las actuaciones de la Sociedad, tanto en la disposición de fondos como en las eventuales emisiones de obligaciones convertibles no puedan, en la práctica, ajustarse fielmente al mismo, se considera que, en garantía permanente del respeto futuro de los fines perseguidos con la subvención, las prevenciones del Convenio-Programa deberían haberse trasladado a los estatutos y no dejar su cumplimiento, a la decisión coyuntural de los Órganos Sociales.*

c) Plazo de ejecución del programa

Se establece con una duración de hasta el 31 de julio de 1990, debiendo presentar la justificación correspondiente ante el Ministerio antes del 30 de septiembre de 1990.

Finalizado el plazo de ejecución y de presentación de justificantes, y obviamente fuera del plazo que podría considerarse razonable para una solicitud de prórroga en el plazo de ejecución, Comercializadora solicitó el 5 de octubre de 1990 una ampliación de plazos hasta el 31 de agosto de 1991.

No consta que hasta la fecha se haya concedido expresamente por el Subsecretario del Departamento prórroga alguna para la ejecución del programa.

En enero de 1991 la Subdirección General de Servicios del Ministerio se dirige a los perceptores directos de la subvención reclamando su justificación. La respuesta de estos es la de adjuntar, como justificantes, documentos que acreditan el traspaso de la subvención a la cuenta corriente de Comercializadora S.A. bien directamente o indirectamente a través de FUNDOSA.

Aunque, según las alegaciones, el Ministerio no considera como cuentadante a Comercializadora, S.A., por las razones que en ellas se indican, la Subdirección General de Servicios se dirige mediante escrito de 22 de febrero de 1991 a dicha Sociedad, requiriendo la aportación de los documentos justificativos del gasto, que al no haber sido aportados, son requeridos nuevamente el 29 de julio de 1992.*

d) Actividades realizadas por Comercializadora S.A.

La empresa fija su domicilio social inicial en el mismo que FUNDOSA (Pº. Recoletos, núm. 21), la persona que figura como Consejero-Delegado en diversos documentos, es, asimismo, quien figura en otros como representante legal de FUNDOSA.

De los informes de la Inspección de Servicios del Ministerio se desprende que a la fecha de finalización del programa (31/7/90) no se había ejecutado prácticamente ninguno de los gastos previstos, materializándose los fondos en la adquisición de activos financieros (letras del Tesoro) y en la concesión de un préstamo a FUNDOSA por importe de 205 millones de pesetas, del que destacan las siguientes características fundamentales:

- Se formaliza mediante un contrato privado de fecha 19 de junio de 1990, y se hace efectivo mediante la entrega a FUNDOSA de cheques bancarios por el total del préstamo.

- Se instrumenta con el objeto de permitir a FUNDOSA la adquisición de un inmueble para su posterior transmisión a Comercializadora S.A., con lo cual quedaría cancelado dicho préstamo.

- El 20 de junio de 1990, FUNDOSA compra mediante contrato privado con una empresa privada un inmueble situado en el Pº. de Recoletos nº 14 de Madrid. El precio fijado en el contrato es de 205 millones de pesetas de los cuales se satisfacen 175 millones en cheques bancarios al portador, demorándose el resto del pago al momento de formalizarse la correspondiente escritura pública. Se establece asimismo una penalización de 25 millones de pesetas en el caso de que el vendedor no compareciese ante el Notario que le fuese indicado en el día y hora establecido.*

El inmueble mencionado había sido adquirido a un tercero por la indicada empresa, y escriturado a su nombre el mismo día, 20 de junio de 1990, en que ésta lo enajena a FUNDOSA. El precio pagado por la adquisición, según consta en el Registro de la Propiedad, ascendió a 100 millones de pesetas.

- El 9 de noviembre de 1990 se formaliza escritura de compraventa de la finca a favor de Comercializadora S.A., como comprador, figurando la empresa privada antes mencionada como vendedor. El precio de venta escriturado es de 205 millones. Se ignora si ha habido lugar a la aplicación de la cláusula penalizadora fijada en el contrato privado suscrito entre FUNDOSA y la empresa vendedora.

Con posterioridad a la ya citada fecha de 31 de julio de 1990 en que finaliza la ejecución del programa subvencionado, los informes de seguimiento emitidos por la Inspección de Servicios del Ministerio ponen de manifiesto la escasa actividad y la dudosa viabilidad futura de Comercializadora S.A., cuya principal actuación ha seguido consistiendo en la inversión de sus fondos en activos financieros, que han generado un rendimiento estimado en más de 66 millones de pesetas a agosto de 1991.

Los ingresos de la subvención en Comercializadora S.A. se han contabilizado como subvenciones de capital, aplicándose a resultados conforme dispone el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de Sociedades. No obstante, las aportaciones efectuadas por los socios podrían tener una naturaleza fiscal distinta de la de subvenciones de capital, lo que podría tener una transcendencia tributaria significativa sobre los ingresos incluidos en la base del Impuesto de Sociedades.

Dada la falta de justificación de las cantidades subvencionadas, pese a haber transcurrido casi dos años desde la fecha en que deberían haberse justificado, así como las posibles irregularidades que han concurrido tanto en la constitución de Comercializadora S.A., como en alguna de sus actuaciones posteriores se ha puesto

en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal los antecedentes detallados de los hechos anteriormente descritos, por si de ellos pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad.

Como conclusión final de este apartado III.8.4, cabe afirmar que la financiación para el sostenimiento de la Iglesia Católica y para la concesión de ayudas a otros fines de interés social mediante la asignación tributaria, constituye un sistema novedoso en la normativa existente sobre esta materia en cuanto que afecta obligatoriamente a dichas finalidades un porcentaje de la imposición estatal directa. Sin embargo, este sistema se ha mostrado insuficiente para sustituir totalmente al de dotación presupuestaria, al no proporcionar a la Iglesia Católica recursos de cuantía similar, según prevé el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede.

La parte destinada a otros fines de interés social se regula por una normativa específica que identifica y diferencia estas subvenciones del resto de las ayudas que se conceden con cargo a los Presupuestos Generales. Sin embargo, en la práctica, se observa que no en todos los casos se respeta de forma escrupulosa lo dispuesto en esa normativa, respecto a quiénes deben de ser los destinatarios de las subvenciones y cuáles deben ser los fines concretos a financiar con la asignación, sin que las alegaciones, por las razones expuestas anteriormente, hayan hecho variar esta apreciación.*

III.9.- FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN MILITAR EN EL EXTRANJERO Y DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS SITUADOS EN EL EXTERIOR PARA TAL FINALIDAD

Continuando la línea marcada en anteriores Informes[27], se ha procedido a un nuevo análisis especial de la contratación para la adquisición de material militar en el extranjero, que se efectúa con cargo a los créditos presupuestarios de la Sección 14 "Ministerio de Defensa".

En esta ocasión la fiscalización se ha centrado, por una parte, en los procedimientos establecidos y seguidos en sus distintas fases por los diferentes Centros Gestores y en la situación justificativa de las inversiones realizadas hasta el ejercicio 1990 (apartado III.9.1) y, por otra, en la gestión de los fondos situados en el exterior y destinados al pago de estas inversiones (apartado III.9.2).

III.9.1.- PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS Y SITUACIÓN JUSTIFICATIVA

Tramitación de expedientes

Los contratos de material militar en el extranjero se encuentran regulados por el Real Decreto 1120/77, de 3 de mayo, y por la Orden ministerial de 16 de junio de 1978, que lo desarrolla.

Esta normativa ampara los contratos de adquisición, sostenimiento, conservación y reposición de material e instalaciones, así como los de prestación de servicios y asistencia técnica, que se formalicen entre la Administración militar española y Gobiernos o Entidades públicas o privadas extranjeras.

La existencia de una regulación específica, suplementaria de la general de contratación administrativa, deriva de las especiales características que presenta el objeto de los contratos, de la propia naturaleza de los contratistas, de las pautas internas establecidas por los correspondientes Gobiernos y de los usos y prácticas mercantiles del comercio internacional.

La normativa aludida pretende dotar a los gestores de estos fondos (Cuarteles Generales) de medios ágiles y eficaces para hacer frente a las necesidades de material militar sin detrimento de las garantías exigidas por el ordenamiento jurídico para la realización del gasto público.

Por las razones que se expresan posteriormente, a pesar de la existencia de la indicada normativa, los Centros Gestores no siguen los mismos procedimientos en las adquisiciones de material militar en el extranjero.

Por cada Cuartel General, que en el momento de publicarse el Real Decreto 1120/77 aún eran Departamentos Ministeriales diferenciados, se ha establecido un sistema propio para la ordenación y tramitación de los expedientes contractuales, para las formas y sistemas de efectuar los pagos, así como para los procedimientos de justificación de aquéllos y de la inversión definitiva de los contratos, sistemas distintos entre sí y que perviven en la actualidad, a pesar de las actuaciones de supervisión y coordinación que viene realizando la Dirección General de Asuntos Económicos del Mº de Defensa (DIGENECO) y de los sistemas de información centralizada establecida para determinadas contrataciones, concretamente para las realizadas en Estados Unidos.

Esta disparidad de procedimientos responde a la existencia de características singulares de este tipo de contratación, no previstas en las disposiciones citadas. La ausencia de sistemas de gestión y control adecuados, da lugar a la presencia de deficiencias que requerirían el establecimiento de las medidas correctoras adecuadas. Entre dichas deficiencias cabe destacar:

a) La falta de remisión de las condiciones de venta, así como de su traducción autorizada y de los informes de las Asesorías Jurídicas de los Ministerios implicados -documentos todos ellos de obligada remisión a este Tribunal de acuerdo con lo previsto en el punto 4º de la Orden Ministerial de 16/6/78, que desarrolla el art. 5 del Real Decreto 1120/77- y falta de constancia en los expedientes de las licencias o declaraciones de importación, entre otros.

b) No aparece generalmente en los expedientes la expresa aceptación por el órgano de contratación de las condiciones de venta ofrecidas por los contratistas, en especial cuando se formulan a través de facturas proforma, ni las preceptivas solicitudes de prórrogas en aquellos supuestos de incumplimiento de las fechas límites de los contratos, ni la imposición de cualquier tipo de penalizaciones en los casos de incumplimiento de los plazos de entrega de los materiales o servicios convenidos.

c) No se obtienen los documentos a emitir por contratistas extranjeros acreditativos de la transferencia de la propiedad y entrega de los bienes, lo que dificulta la comprobación material prevista en el art. 8 del RD 1120/77. Este trámite, además de ser necesario para la justificación de la inversión, facilitaría la disponibilidad y homogeneización de los documentos acreditativos de la recepción de los materiales contratados, y evitaría las dificultades existentes en la actualidad a la hora de rendir a este Tribunal las oportunas justificaciones.

d) No aparece fundamentada la utilización de créditos documentarios para el pago de obligaciones derivadas de estos contratos. Este procedimiento se emplea con absoluta falta de unidad de criterio entre los gestores, cuando su uso debe responder, de forma exclusiva, a supuestos de estricta necesidad, para evitar el incremento de los costes financieros de los contratos.

e) No consta en los expedientes que se efectúe la comunicación a la Intervención, prevista en el art. 9 del Real Decreto 1120/77, sobre la utilización temporal de fondos sobrantes de contratos finalizados para atender a pagos de otros en curso de ejecución. Por otra parte, esta utilización de fondos sobrantes que en el RD citado se autoriza con carácter excepcional, es una de las causas que originan los retrasos en la rendición a este Tribunal de las cuentas justificativas de las inversiones de los contratos originarios.

Las anteriores deficiencias precisan para su corrección, como ha sido reiteradamente expuesto por este Tribunal, del establecimiento de criterios uniformes de obligatoria utilización por los Cuarteles Generales y el Órgano Central del Ministerio en cuantos trámites se encuentran reglamentariamente especificados en la normativa, y de la centralización de la información sobre las necesidades reales en materia de bienes, servicios y suministros para las Fuerzas Armadas, y de las condiciones para su adquisición en el exterior.

No se aceptan las alegaciones relativas a este apartado ("Tramitación de expedientes") porque en nada desvirtúan la realidad de las deficiencias documentales puestas de manifiesto, deducidas del contraste de la normativa aplicable con la práctica seguida, sin que afecte a estos efectos la distinción de expedientes a que se alude en dichas alegaciones. Los llamados COAs (Cartas de Oferta y Aceptación) se envían -no siempre- a este Tribunal pero acompañando a la documentación justificativa de la inversión y sin la preceptiva traducción al castellano, y no en el momento y en la forma establecidos por las normas para la remisión de los documentos propios del expediente de contratación, a cuya tramitación se refiere el epígrafe alegado. Por otra parte, los COAs, por su propia naturaleza, no pueden sustituir a los documentos acreditativos de la transferencia de la propiedad y entrega de los bienes.*

Procedimientos de pago

Con relación a los procedimientos de pago, la necesidad de hacer efectivos los mismos en el momento de llevarse a cabo la facturación por el contratista, ha originado, durante mucho tiempo, la anticipación de fondos respecto a las fechas de los vencimientos previstos para las obligaciones de pago, y que, como ocurre en los contratos con el Gobierno americano, aunque se centralice en una cuenta la materialización del pago de las adquisiciones, existan cuentas abiertas en entidades de crédito privadas a nombre de los Agregados de cada Cuartel General, a cuyo análisis, por su importancia, se dedica el apartado III.9.2 posterior.

Justificación de las inversiones

La previsión contenida en el art. 7.1 del Real Decreto 1120/77 respecto de la justificación definitiva de la inversión realizada a través de cada contrato, acorde con la existencia de contratos abiertos y de aquellos otros de duración plurianual, ha dado lugar, en la práctica, a confundir la justificación de los fondos expedidos por los mandamientos de pago, con esa específica justificación final de la inversión de cada contrato.

De tal manera, la justificación de los mandamientos de pago que se remite actualmente con el carácter de provisional, en lugar de justificar los pagos realizados a los contratistas como contraprestación de los bienes o servicios entregados, se limitan a acreditar el mero trasvase de fondos desde el Banco de España a las cuentas abiertas a nombre de los Agregados en el extranjero como se explicará posteriormente. No se procede a la rendición oportuna de las cuentas de los pagos "a justificar" prevista en el art. 79.4 del TRLGP, originándose retrasos -reiteradamente denunciados por este Tribunal- a los que se añaden, además, la falta de la comprobación material de la inversión en el lugar donde se transfiere la propiedad de los bienes exigida por el art. 8 del citado RD 1120, que se sustituye por la intervención de la inversión en los puntos de destino de los materiales adquiridos. La dispersión, almacenamiento y tiempos de llegada de las remesas, provoca, por otra parte, en numerosos supuestos, la ausencia de esta documentación en la Unidad responsable de la rendición de la justificación a este Tribunal.

[27] Ver, entre otros, los apartados III.7 de los Informes Anuales correspondientes a los ejercicios 1987 y 1989.

Situación justificativa

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo precedente se van incrementando progresivamente el número y cuantía de los contratos que, no obstante coincidir su finalización con el periodo temporal 1982/1990, a la fecha de redacción de este informe (julio de 1992), se encuentran pendientes de la definitiva justificación de la inversión realizada como se puede observar en el cuadro que se incluye a continuación.*

(Millones de pesetas)

CUARTEL GENERAL	INVERSIONES PENDIENTES DE JUSTIFICAR				
	1982-87	1988	1989	1990	TOTAL
Ejército Tierra	1.161	267	486	860	2.774
Armada	79.250	7.579	13.290	34.862	134.981
Ejército Aire	26.717	19.184	4.760	17.726	68.387
TOTAL	107.128	27.030	18.536	53.448	206.142

La elevada cuantía de estas inversiones y los años a que corresponden ponen de manifiesto la necesidad inexcusable de que se regularice con prontitud esta situación, adoptando las medidas que sean necesarias.

No pueden aceptarse las alegaciones relativas a la anterior cuantificación de las inversiones pendientes de justificar por las siguientes razones:

a) Los contratos finalizados no se acumulan con los pendientes de finalizar, ya que en el cuadro precedente sólo se incluyen los que, de acuerdo con la documentación obrante en este Tribunal, habrían concluido en el periodo 1982-1990.

b) Carece de fundamento la prevención manifestada en las alegaciones de que la situación justificativa de los contratos ejecutados en el periodo 1982-1990 se sitúe en julio de 1992. Contra tal prevención se manifiesta que ello significa, simplemente, que en la cuantificación se han tenido en cuenta los justificantes recibidos hasta esta última fecha. Por ello, si el examen se hubiera realizado el 31/12/90, el importe pendiente de justificar hubiera sido aún mayor.

c) Finalmente, el que existan cantidades depositadas en EE.UU. que pueden minorar la cuantificación realizada de las inversiones pendientes de justificar del periodo 1982-1990, significaría que dichos depósitos, situados, en su mayor parte, en cuentas de entidades financieras privadas abiertas en el exterior, precisamente para agilizar los pagos, se habrían mantenido en esta situación, al menos, un año y medio (desde finales de 1990 a julio de 1992), lo que supondría, en todo caso, una actuación aún más criticable.

No obstante, se ha matizado el texto del informe con el fin de aclarar con más precisión su contenido.*

III.9.2.- GESTIÓN DE LOS FONDOS SITUADOS EN EL EXTERIOR Y DESTINADOS A ADQUISICIONES MILITARES EN EL EXTRANJERO

El RD 1120/77 establece en su art.7.1 que los mandamientos de pago a justificar expedidos para estas contrataciones, se daten mediante la documentación emitida por el Banco de España acreditativa de la situación de divisas efectuada a favor del contratista y recibo oficial del mismo, o si las adquisiciones convenidas exigieran la apertura de créditos documentarios, mediante la retención de los fondos para la cobertura de los mismos.

Según se desprende de la documentación remitida a este Tribunal, tanto para justificar dichos pagos como para acreditar la inversión definitivamente realizada por cada contrato, se utilizan las Agregadurías del Ministerio de Defensa en las Representaciones diplomáticas españolas en los países de los contratistas, para a través de ellas hacer frente al pago material derivado de la entrega de los bienes o servicios contratados, utilizándose al efecto cuentas corrientes abiertas a nombre de las citadas Dependencias, en las que se sitúan las divisas correspondientes a los pagos que se prevén realizar.

Esta práctica, no prevista en la normativa específica de este tipo de contratación, ha sido adoptada como una mecánica añadida (innecesaria por las razones que se expresan posteriormente) frente al requerimiento de fondos por los contratistas, para atender las facturas que émiten, a causa de una proximidad geográfica con los mismos, si bien supone que un elevado importe de los fondos que salen del Tesoro Público para tal fin se depositan en instituciones bancarias de naturaleza privada, pasando a ser gestionados en el exterior por funcionarios habilitados al efecto, pero ajenos a los órganos gestores de los créditos presupuestarios.

A la vista de los anteriores datos, se procedió a requerir del Ministerio de Defensa las normas internas dictadas sobre el control de las cuentas abiertas a nombre de las diferentes Agregadurías así como información sobre los movimientos de las mismas, requerimientos que fueron centralizados en la Dirección General de Asuntos Económicos del citado Departamento ministerial (DIGENECO), órgano al que corresponde la administración y control de este tipo de recursos, según establece el art. 8.2 del RD 1/1987, de 1 de enero, sobre estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.*

En relación a las alegaciones a este último párrafo -que, aunque no se aceptan, para evitar la supuesta confusión a que se hace referencia en ellas, se ha introducido en el texto el vocablo "requerimientos"- conviene señalar que el atribuir la administración de estos fondos (que no necesariamente implica su disposición y manejo directos) a la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, a la vista del RD 1/1987 citado y otras normas de dicho Ministerio, resulta totalmente pertinente.*

Regulación interna

Los fondos existentes en las Agregadurías del Ministerio de Defensa en el extranjero se encuentran regulados por la Orden Ministerial Comunicada 45/86, de 3 de junio, y por las normas de desarrollo dictadas con fecha 8 de julio de 1986 por la DIGENECO de dicho Ministerio. En ellas se establece la existencia de tres tipos de cuentas en las que se situarán los fondos correspondientes a adquisiciones de material, intereses y administración de las Agregadurías y de las que se remitirá a la Dirección General citada información a través de los estados contables que se describen a continuaio´n:

a) Cuenta de fondos para adquisiciones de material y servicios (FAMS)

Reflejarán como cargos las cantidades que se reciban para esta finalidad del Ministerio de Defensa, siendo abonos los pagos a los proveedores definidos en los correspondientes libramientos de fondos.

El saldo de esta cuenta podrá estar depositado en uno o varios bancos acordados por la Dirección General, a la que se le rendirá cuenta mensual según modelo establecido al efecto, debiéndose acompañar a la misma extracto mensual de las cuentas corrientes en las que se encuentren depositados las existencias finales de fondos. En la cuenta rendida deberán constar los conceptos a que están afectadas las citadas existencias.

b) Cuenta de intereses

Deberá recoger la liquidación de todos los intereses que se produzcan en las cuentas bancarias FAMS y de intereses, que constituirán su cargo. Como abonos constarán los pagos que hayan sido autorizados por la DIGENECO. Asimismo se rendirá mensualmente cuenta según modelo establecido al efecto.

c) Cuenta de administración de las Agregadurías

No tiene relevancia para el tema de la contratación y reflejará la gestión de los recursos presupuestarios anuales para el sostenimiento de las Dependencias mencionadas.

Fondos mantenidos en las cuentas FAMS y en las de intereses

Se ha examinado la documentación solicitada por este Tribunal sobre las cuentas bancarias FAMS y de intereses del año 1990 correspondientes a las Agregadurías Militares que, según la información recibida, las utilizaban, así como los estados contables relativos a determinadas cuentas de intereses.

Debe significarse que no han sido objeto de la presente fiscalización las cuentas de administración de las Agregadurías Militares por ser ajenas a la finalidad perseguida con este trabajo.

Los saldos medios y finales en las cuentas bancarias examinadas, valorados en pesetas según el tipo de cambio medio de las divisas a 31 de diciembre del año examinado, respectivamente, son los siguientes (en millones de pesetas):

TIPO DE CUENTA	SALDO MEDIO	SALDO A 31/12/90	INTERESES GENERADOS
FAMS			
Banco Exterior (México, Chile, Francia y EE.UU)	9.382	5.423	750
Banco Bilbao Vizcaya (EE.UU)	6.873	5.047	502
Banco Hispano Americano (EE.UU)	451	312	34
Otros bancos (Varios)	1.291	1.490	122
TOTAL FAMS	17.997	12.272	1.408
INTERESES			
BANESTO (EE.UU)	8.769	6.446	675
Banco Central (EE.UU)	1.460	2.261	79
Otros bancos (Varios)	312	380	28
TOTAL INTERESES	10.541	9.087	782
T O T A L	**28.538**	**21.359**	**2.190**

Del examen de la apertura y funcionamiento de estas cuentas y sobre todo del análisis de los elevados depósitos mantenidos en ellas se extraen las siguientes conclusiones:

a) A pesar de encontrarse reguladas en la normativa interna del Ministerio de Defensa, no se ha acreditado la autorización de su apertura por el Ministerio de Economía y Hacienda, Departamento que tiene atribuidas las competencias en relación con la Tesorería del Estado, si bien su existencia es conocida por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a través de las órdenes al Banco de España para situación de divisas en el extranjero. Tampoco se ha acreditado el criterio aplicado en la selección de las entidades de crédito en las que se encuentran abiertas estas cuentas.*

En relación a las alegaciones a la falta de autorización de la apertura de estas cuentas -a la que no se le da especial importancia en el Informe- hay que señalar, por una parte, que, en

1990, año a que se refiere el Informe, el citado Texto Refundido, en cuyo artículo 119 se exige autorización para la apertura de cuentas en entidades de crédito distintas del Banco de España, estaba ya vigente y, por otra, que, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley General Presupuestaria de 1977, la prestación de servicios por dichas entidades era igualmente excepcional, sin que se haya alterado al respecto el ámbito competencial del Ministerio de Economía y Hacienda. No obstante, se ha matizado la redacción del párrafo alegado, para una mayor precisión.*

b) Los mecanismos de control interno del manejo de estos fondos se consideran muy deficientes, ya que la falta del puesto de Interventor en las Agregadurías no se subsana con otros controles alternativos, como lo demuestra el hecho de que en algunas cuentas la disposición de los fondos se realiza mediante firma indistinta de los funcionarios autorizados.

La rendición de información "a posteriori" a los Servicios Centrales del Ministerio no se considera garantía objetiva suficiente de la adecuada utilización de los fondos.

No pueden aceptarse las alegaciones a este apartado b) porque contraargumentan una supuesta afirmación no contenida en el Informe. El control interno se considera muy deficiente porque, ante la falta del puesto de Interventor en las Agregadurías -situación derivada lógicamente de la estructura de la Intervención General de la Defensa y que como tal no se cuestiona- no se han establecido los procedimientos adecuados que garanticen objetivamente la salvaguarda de estos fondos y su adecuado reflejo contable, fines ambos que persigue todo sistema de control interno. La disposición con firma indistinta de algunas cuentas y la falta de registro de los indicados fondos en la contabilidad oficial rendida a este Tribunal (Ver apartado e) posterior) constituyen graves debilidades de control interno sobre las que nada se contraargumenta en las alegaciones.*

c) No se encuentra justificación alguna al mantenimiento de saldos tan elevados de tesorería en entidades de crédito privadas.

La inmovilización indefinida en las cuentas de intereses de fondos cuyo destino no puede ser otro que su ingreso en las cuentas del Tesoro Público y su aplicación al presupuesto, supone no sólo una manifiesta irregularidad, sino también, una gestión ineficiente de los recursos públicos, toda vez que el coste de la apelación del Estado al mercado financiero es más elevado que los rendimientos obtenidos en las cuentas que aquí se analizan[28].

En el caso de las cuentas FAMS, que vienen a ser unas cuentas de habilitación secundarias y subordinadas a la principal abierta en el Banco de España, la acumulación de varios miles de millones de pesetas tampoco encuentra justificación alguna, por cuanto, atendida su cuantía en relación al volumen de pagos realizados, implica que los fondos se transfieren desde el Banco de España con excesiva antelación o, alternativamente, que se demoran los pagos a los acreedores en contra de la propia finalidad (agilizar pagos en el extranjero) con la que se pretende justificar su existencia.

A lo expuesto en los dos párrafos precedentes debe añadirse, como deficiencia adicional de gestión de los fondos públicos, el hecho de que los saldos bancarios referidos se hayan mantenido en su práctica totalidad en dólares durante un periodo en que esta divisa ha venido sufriendo un progresivo deterioro en su tipo de cambio respecto a la peseta, evaluable para el ejercicio 1990 en un 11,6% aproximadamente, con la consiguiente pérdida de valor de estos activos.

En relación a las alegaciones a este punto c), sólo cabe señalar que se considera positivo que se estén elaborando normas para el manejo de los fondos FAMS, siendo conveniente señalar que dichas normas deben tomar en consideración que, en la actualidad, por la facilidad y la rapidez con las que se pueden mover capitales entre España y los países suministradores de material militar, difícilmente encuentra justificación el mantenimiento de fondos por cuantías significativas, en cuentas abiertas en el extranjero. Debe insistirse aquí, por ello, en la recomendación contenida en el último párrafo de este apartado III.9, que este Tribunal desearía ver plasmada en las normas de referencia.*

d) El mecanismo de justificación de los pagos previsto en el artículo 7.1 del Real Decreto 1120/77 resulta desvirtuado e ineficaz ya que la data mediante la documentación emitida por el Banco de España, acreditativa de la situación de divisas y recibo del contratista, se sustituye por la acreditación del pago a la Agregaduría militar, con lo que las cuentas rendidas únicamente reflejan el movimiento de fondos entre dos órganos administrativos pero no su salida al acreedor.

Lo procedente sería que en dichas cuentas figurasen como cargo los fondos recibidos del Tesoro, como data provisional el importe de los recibos justificativos del pago al contratista o, en su caso, el de la carta de pago del reintegro, y finalmente como saldo las existencias con desglose de las situadas en el Banco de España y en el exterior.

El hecho de que se hayan remitido a los gestores de los gastos los recibos y facturas emitidos por el contratista, como se pone de manifiesto en las alegaciones a este apartado d), no supone que dichos gestores hayan remitido al Tribunal los indicados recibos como justificantes de los correspondientes mandamientos de pago, según exige el art. 7.1 del RD 1120/77. Los fundamentos en que se basa el informe -que dicen desconocerse en las alegaciones- se encuentran en la fiscalización permanente por este Tribunal de los documentos contables expedidos para la contratación militar en el extranjero y sus cuentas justificativas, desde el año 1984 hasta la actualidad, en la que se han evidenciado los hechos descritos en el Informe, sin que las alegaciones aporten prueba alguna en sentido contrario.*

e) La situación descrita en los párrafos anteriores desvirtúa la información de la Cuenta de la Administración General del Estado, ya que no se recogen presupuestariamente los intereses generados, y el gasto imputado al presupuesto se encuentra incorrectamente incrementado en la medida que tales fondos pueden corresponder a suministros o servicios aún no realizados. Asimismo, dado que por el procedimiento seguido, una vez transferidos los recursos a las cuentas en el extranjero se considera, a efectos contables, ya realizado el pago, quedan distorsionados tanto los saldos de acreedores como los de tesorería[29].

Intereses generados y su destino

Según se observa en el cuadro presentado anteriormente, los intereses generados por las cuentas FAMS y de intereses examinadas durante el ejercicio 1990 ascienden, según valoración de las divisas a 31 de diciembre de dicho año, a 2.190 millones de pesetas.

Atendidos los saldos medios totales expresados en el mismo cuadro, se deduce que el tipo medio de interés percibido por los fondos depositados asciende aproximadamente al 7,7%, si bien varía según tipo de cuenta y entidad financiera.

Considerando que el importe de los intereses generados durante 1990 -que como se ha indicado anteriormente se ingresan en las llamadas cuentas de intereses- ascienden a 2.190[30] millones de pesetas (al tipo de cambio medio de las divisas en 31/12/90), y que el saldo conjunto de dichas cuentas a 31/12/89 se elevaba a 11.797[31] millones de pesetas (según tipo de cambio a 31/12/90), el saldo resultante a esta última fecha, si no se hubieran realizado operaciones ajenas a la finalidad de estas cuentas, debería ser de 13.987 millones en lugar de los 9.087 que aparecen en el cuadro precedente, produciéndose, por tanto, una diferencia por defecto de 4.900 millones de pesetas.

Del examen realizado, así como de las explicaciones dadas a requerimiento de este Tribunal sobre la referida diferencia, se extraen las siguientes conclusiones:

a) Las cuentas de intereses, dado su carácter de cuentas de ingresos, de acuerdo con las disposiciones vigentes, están previstas para custodiar transitoriamente estos recursos hasta su ingreso en el Tesoro Público y consiguiente aplicación al presupuesto, que deben producirse sin dilación y sin traspasar, en todo caso, la frontera temporal del cierre del ejercicio económico. Sin embargo, los intereses generados se han venido acumulando año tras año en las referidas cuentas sin que se realizase ingreso alguno en el Tesoro Público y, por ende, sin que fuesen aplicados al presupuesto, lo que ha supuesto una clara infracción de las normas presupuestarias y contables. Sólo a partir del mes de febrero de 1991 y coincidiendo con las actuaciones fiscalizadoras de este Tribunal, comienzan a cumplirse estas obligaciones, habiéndose acreditado el ingreso en el Tesoro Público hasta abril de 1992 de 7.362 millones de pesetas, correspondientes a intereses de los años 1985 a 1990.

b) Según lo indicado en a) las cuentas de intereses de acuerdo con las normas vigentes, no pueden tener otra finalidad que el mantenimiento transitorio de estos recursos hasta su ingreso en el Tesoro Público. Sin embargo, la normativa interna del Ministerio de Defensa, a la que se ha hecho referencia anteriormente, contempla la posibilidad de su utilización para fines distintos del señalado, siempre que exista autorización del Director General de Asuntos Económicos. Se ha observado que las cuentas de intereses de la Agregaduría Militar de Estados Unidos se ha venido utilizando, sin que conste la indicada autorización, al menos expresa, de dicha Autoridad -que en todo caso se considera insuficiente para justificar una excepción al régimen general aplicable- para realizar anticipos de pagos correspondientes a contratos de adquisición de material o a gastos producidos por buques de la Armada, para recoger depósitos temporales de fondos librados para adquisiciones de material, mantenimiento de las Agregadurías y gastos de personal, que posteriormente son transferidos a las cuentas correspondientes y, en fin, para otros fines (pagos de alquileres de mobiliario, ingresos por prestación de servicios, etc.)

Concretamente, en 1990, se han realizado a través de estas cuentas las siguientes transacciones:

- Pagos por 6.083 millones de pesetas para atender obligaciones derivadas del contrato SBQ (Programa FACA - Aviones F-18) -compensados, en parte, por el ingreso durante el ejercicio de 1.503 millones de pesetas librados para dicho programa- y 397 millones para atender obligaciones del contrato de adquisición de aviones Boeing 707-320. Se desconoce si, en todo o en parte, estos pagos habían venido precedidos de depósitos previos en estas cuentas de fondos librados para estas finalidades.

[28] Ver a este respecto el apartado I.2.3 de la Moción de 25 de junio de 1986, de este Tribunal, elevada a las Cortes Generales (BOE de 21/1/1987).

[29] Ver apartados I.2.1.1.B.8) y I.2.2.1.E) anteriores de este Informe.

[30] Los intereses realmente abonados en cuenta pueden diferir aunque no significativamente de este importe debido al desfase temporal de su liquidación.

[31] Se valora el saldo existente en 31/12/89 según la paridad del dólar a 31/12/90 para depurar la pérdida de valoración por la bajada del tipo de cambio de dicha divisa que asciende a 1.553 millones de pesetas.

- Pagos para atender gastos de alquileres de viviendas de las Agregadurías -18 millones de pesetas- y remesas al Mando Supremo Aliado (SACLANT) -32,8 millones de pesetas-.

- Ingresos por compensación de anticipos para operaciones de la ONU (sobre todo para el envío de cascos azules a Namibia) -26,2 millones de pesetas- y para cubrir insuficiencias de la cuenta de la Administración de la Agregaduría de Defensa -19,4 millones de pesetas-.

Todas estas transacciones constituyen la causa principal de la diferencia de los saldos de estas cuentas a 31/12/89 y 31/12/90 a que se ha hecho referencia anteriormente. Por otra parte, el hecho de que, a lo largo de varios años, se hayan realizado este tipo de operaciones a través de las cuentas de intereses impide, lógicamente, identificar su saldo a la última fecha referida con el importe de los intereses acumulados hasta la misma.*

En relación a las alegaciones a los párrafos anteriores relativos al epígrafe "Intereses generados y su destino", que no se aceptan, cabe señalar lo siguiente:

a) Las afirmaciones y estados numéricos formulados en dichas alegaciones en nada desvirtúan el contenido del Informe y sólo demuestran que el Ministerio de Defensa, en contradicción con su propia normativa (O.M. Comunicada 45/86 e Instrucción de 8/7/86) expuesta en el epígrafe anterior "Regulación interna", ha utilizado las cuentas de intereses para fines que no le son propios, canalizando a través de ellas fondos destinados a adquisiciones de material y a otras atenciones, sin razón alguna para ello, al existir cuentas específicas para estas finalidades, y sin que conste la autorización -que en todo caso se considera insuficiente- de la Dirección General de Asuntos Económicos.

b) La fiscalización de este Tribunal, que se ha realizado contrastando la situación real de las cuentas con la que debería deducirse si se hubieran seguido correctamente las disposiciones aplicables, ha puesto de manifiesto que el saldo "teórico" de las cuentas de intereses a 31/12/90 "si no se hubieran realizado operaciones ajenas a su finalidad" -se dice literalmente en el texto- hubiera sido 4.900 millones de pesetas superior al que aparece en ellas, describiéndose seguidamente las operaciones fundamentales (ajenas a su finalidad) que explican esta diferencia, lo que excluye cualquier interpretación en el sentido señalado en las alegaciones.

c) Respecto a las matizaciones temporales a que se refieren las alegaciones en su última parte, este Tribunal se ratifica en que los primeros ingresos al Tesoro Público en concepto de intereses generados en el periodo 1985-1990, se acreditan mediante cartas de pago fechadas el 4/2/91 -fecha bastante posterior al comienzo de la fiscalización de estos fondos en relación a los ejercicios 1988-1989- constando como ingresados los últimos intereses del año 1990 el 10/4/92.

d) Finalmente, se señala que, en la nueva revisión de la documentación recibida en este Tribunal, se confirma la cifra de 2.190 millones de intereses generados en 1990, sin que con las alegaciones se aporte documentación adicional alguna que permita reducir dicha cifra a los 2.170 millones a que se hace referencia en ellas.*

Lo expuesto en el epígrafe III.9 sugiere la necesidad de que se revisen en profundidad los procedimientos de gestión seguidos, así como los de justificación de las inversiones realizadas, erradicando aquellas prácticas que este Tribunal ha venido considerando anómalas. En todo caso, debe procederse en el plazo más breve posible a dar la aplicación debida a los intereses depositados en las cuentas de las Agregadurías Militares y a la supresión o regularización de las cuentas FAMS, habilitando el mecanismo que haga posible el pago directo a los contratistas desde la correspondiente cuenta del Tesoro Público en el Banco de España por el importe exacto de la facturación de aquéllos.

IV. ANALISIS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES ESTATALES Y ENTES DE DERECHO PUBLICO

ÍNDICE

IV.1. SOCIEDADES ESTATALES NO FINANCIERAS . . . . .
IV.1.1. Examen y comprobación de las cuentas
IV.1.2. Resultado del examen y comprobación de las cuentas . . . . . .
IV.1.3. Sobre el grado de ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación (PAIF). . . . . .
IV.1.4. Análisis de la ejecución de los PAIF

IV.2. SOCIEDADES ESTATALES FINANCIERAS . . . . . .
IV.2.1. Instituto de crédito oficial . . .
IV.2.2. Otras entidades oficiales de crédito
IV.2.3. Banco Exterior de España, S.A. (B.E.X.) . . . . . .
IV.2.4. Sociedades Estatales de Seguros. .
IV.2.5. Banco de España . . . . . .
IV.2.6. Sociedad mixta de segundo aval . .
IV.2.7. Fondos de garantía de depósitos . .

IV.3 ENTES DE DERECHO PÚBLICO . . . . . .
IV.3.1. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional . . . . . .
IV.3.2. Consejo de Seguridad Nuclear . . .
IV.3.3. Instituto Español de Comercio Exterior . . . . . .
IV.3.4. Radiotelevisión española (R.T.V.E.)
IV.3.5. Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISION)
IV.3.6. Comisión nacional del Mercado de Valores . . . . . .

IV. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES ESTATALES Y ENTES DE DERECHO PUBLICO.

IV.1.- SOCIEDADES ESTATALES NO FINANCIERAS.

IV.1.1.- EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS.

El número de Sociedades estatales no financieras en las que el Estado, sus Organismos Autónomos y otros Entes públicos participan de forma mayoritaria, directa o indirectamente, asciende en 1990 a 470, de las cuales a la fecha de cierre de los trabajos para la elaboración del presente Informe Anual, habían rendido sus cuentas 333, quedando pendientes de hacerlo 137.

El 30% de las sociedades no han rendido sus cuentas correspondientes al ejercicio de 1990. Si se distribuyen las sociedades en matrices y filiales, se observa que entre las primeras sobre un censo de 120 sociedades han rendido sus cuentas 104 (86%)y han dejado de hacerlo 16 (14%); y en el colectivo de las filiales hay 229 sociedades (65%) cuyas cuentas han sido rendidas y 121 (35%) que no lo han sido, sobre un total de 350 sociedades filiales.

Se relacionan a continuación las 137 Sociedades Estatales que no han rendido las cuentas correspondientes al ejercicio de 1990, distribuidas entre los grupos existentes o considerados como tales, atendiendo al titular que ejerce el dominio sobre las Sociedades Estatales que lo componen: "Instituto Nacional de Industria" (INI), "Instituto Nacional de Hidrocarburos" (INH), "Dirección General del Patrimonio del Estado" (DGPE), y un cuarto grupo en el que se engloban bajo la denominación "Otras Sociedades Estatales No Financieras" (OTRAS), aquellas sociedades que pertenecen a diversos Ministerios u otros Entes Públicos y que no reúnen unas características de tamaño y homogeneidad como para constituir un grupo autónomo.

MATRICES

Grupo INI
- Diques del Atlántico, S.A. (DIATLANSA)(*)
- Grupo de Empresas Alvarez, S.A. (GEASA)(*)
- E.N. para el Desarrollo de la Industria Alimentaria S.A.(*)
- E.N. Elcano de la Marina Mercante, S.A.
- INIEXPORT, S.A.
- INFOINVEST, S.A.(*)

Grupo DGPE
- Sdad. Est. V Centenario del Descubrimiento de América, S.A.(*)
- Inmobiliaria de Promociones y Arriendos, S.A. (IMPROASA)(*)
- Sdad. Est. de Estiba y Desestiba del Puerto de Algeciras, S.A.
- Sdad. Est. de Estiba y Desestiba del Puerto de Avilés, S.A.
- Sdad. Est. de Estiba y Desestiba del Puerto de Cartagena, S.A.(*)
- Sdad. Est. de Estiba y Desestiba del Puerto de Marín, S.A.
- Sdad. Est. de Estiba y Desestiba del Puerto de Santander, S.A.
- Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A.(*)
- Sdad. Est. de Planes de Viabilidad de la Marina Mercante(*)

Grupo OTRAS
- E.N. de Transporte de Viajeros por Carretera (ENATCAR)(*)

---

* Las cuentas de las sociedades marcadas con (*) fueron rendidas con posterioridad al cierre de los trabajos para la elaboración del presente Informe Anual.

FILIALES

Grupo INI
- Gas y Electricidad, S.A.
- Lignitos, S.A.
- Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A. (ERZ)
- Cía. Española de Sistemas Aeronáuticos, S.A. (CESA)
- Astilleros y Talleres de Celaya, S.A. (ASTACE)(*)
- Fundición de Asúa, S.A. (FUNDIASA)(*)
- Desgasificadores y Limpieza de Tanques, S.A.(*)
- Olespan AG(*)
- Oxal, S.A.(*)
- Novamor, S.A.
- Productos Murcianos Alimentarios, S.A.
- Financiera Pegaso France, S.A.
- Pegaso Benelux NV
- Pegaso Sur Ltd.
- Pegaso Leasing, S.A.(*)
- Pegaso France, S.A.
- Financiera Automotriz Pegaso
- Comercial Chile, S.A.
- Hispano Venezolana de Motores, S.A. (HIVEMCA)
- Electroquímica del Noroeste, S.A. (ELNOSA)(*)
- Porcelanas de Vigo, S.A. (POVISA)(*)
- La Ibero Tanagra, S.A. (ITSA)(*)
- S.A. de Electrónica Submarina (SAES)(*)
- Diseño e Ing. de Sistemas Electrónicos e Informáticos, S.A. (*)
- Aluperfil France, S.A. (ALUFRANCE)(*)
- Granitos Españoles, S.A. (GRAESA)
- Viva, Vuelos Internacionales de Vacaciones, S.A. (VIVA)(*)
- Compañía Auxiliar Cargo Exprés, S.A.

Grupo INH
- Centro Distribución Vallés Occidental, S.A.
- Texsa
- Asfaltos del Norte, S.A. (ASFALNOR)
- Noroil
- Repsol Polivar, S.A.
- Gas Navarra, S.A.
- Gas Huesca, S.A.
- Gas Burgos, S.A.
- Cía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA)
- Corporación Española de Hidrocarburos, S.A. (CHC)
- Campsa Estaciones de Servicio, S. A.
- Casablanca
- Aeropuerto Palma, S.L.
- Apeadero S.L.
- Distribuidora Baque, S.A.
- Barajas
- Begoña
- Carburantes La Cañada
- Cars
- E.S. Las Lomas, S.L.
- Elsorbe, S.A.
- Enecuri, S.A.
- Estella
- Gas Ejido, S.A.
- Gasolina del Polígono, S.L.
- Hinia, S.A.
- Marín Martín Forero, S.L.
- Orillamar
- Ornime Saile, S.A.
- Distribuidora Pazos, S.A.
- Puente la Reina, S.L.
- Raincla, S.A.
- Ripoll, S.L.
- S.S. de Elorriaga
- Sabadell Tarrasa
- San Cristóbal Egea
- Santa María, S.L.
- Sifesa
- Socamp, S.A.
- Avda. Mediterráneo, nº 9
- Minimercados
- Avda. América, nº 18
- Soler y Mora, S.A.
- Peix y Soler
- Su Eminencia, S.A.
- Taberne, S.L.
- Vértice Albacete
- Vilapreser, S.A.
- Tomelloso
- E.S. Alicante
- Servicios Reunidos de Carretera
- E.S. Granada
- Mozo y Aragón
- E.S. Santander
- Repsol Méjico, S.A.

Grupo DGPE
- Tabapress, S.A.
- Dist. y Exp. de Máquinas Automáticas del Norte, S.A.
- La Lactaria Andaluza, S.A.[1]
- Central Lechera Vizcaína, S.A. (CLVSA)[1]
- Lactaria Montañesa Sam, S.A.
- Carnes y Conservas Españolas, S.A. (CARCESA)
- Consiber, S.A.(*)
- Frioalimentos D'arago, S.A. (FRIDARAGO)
- Congelados Ibéricos, S.A. (COISA)
- Nabisco Brands Portugal
- Centro Minero Penauta, S.A.(*)
- Efeagro, S.A.
- Acan
- Indualagón
- Oleaginosas del Centro, S.A. (OLCESA)(*)
- Mercobadajoz, S.A.(*)
- Merco of América Inc.
- Mercocanarias, S.A.
- Mercocastellón, S.A.
- Mercodistribución, S.A.
- Mercojaén, S.A.
- Mercolérida, S.A.
- Destilerías de Cazalla, S.A.
- Alcoholes Nuñez, S.L.(*)
- Viñedos Españoles, S.L.(*)
- Anella Olímpica de Montjuich, S.A.
- Instituto Municipal de la Promoción Urbanística, S.A.

Grupo OTRAS
- Comercial Transportes del Mediterráneo, S.A. (CTM)(*)
- Polígono Industrial de Granadilla(*)
- Equipamiento de Estaciones, S.A. (EQUIDESA)(*)
- Suelo Industrial de Galicia(*)
- Restauraciones del Noroeste, S.A.
- Andreo, S.A.(*)
- Mercados Centrales de Abastecimientos de Tenerife, S.A.(*)
- Mercasa Deutschland
- Red Areas Parque(*)
- Integración Comercial Alimentaria, S.A.
- Jobac, S.A.(*)

1 Estas sociedades fueron absorbidas por lo que no tienen que rendir cuentas a 31 de diciembre pero sí a la fecha de absorción en la que tuvieron que efectuar un cierre de contabilidad.

En el cuadro resumen que se incluye a continuación se establece la distribución entre grupos matrices y filiales; y a su vez, dentro del GRUPO INI, que es el más numeroso, se hace una agrupación sectorial, utilizando para ello (si bien con algunas modificaciones) la clasificación interna en Divisiones del propio INI.

GRUPO	DIVISION	MATRICES			FILIALES			TOTAL		
		No R	R	T	No R	R	T	No R	R	T
INI	*Instituto*		1	1					1	1
	Energía Eléctrica		2	2	2	15	17	2	17	19
	Siderurgia y Minería		7	7	1	13	14	1	20	21
	Defensa		3	3	1	8	9	1	11	12
	Construcción Naval	1	3	4	3	9	12	4	12	16
	Bienes de Equipo		5	5	1	5	6	1	10	11
	Aluminio		1	1	2	7	9	2	8	10
	Alimentación	1		1	2	4	6	3	4	7
	Electrónica e Informática		1	1	2	5	7	2	6	8
	Fertilizantes		3	3	1	1	2	1	4	5
	Transportes	1	3	4	2	13	15	3	16	19
	Automoción		1	1	8	7	15	8	8	16
	Empresas Diversas	1	4	5	3	9	12	4	13	17
	Promoción Industrial		7	7					7	7
	Empresas de Comercio	2	4	6		3	3	2	7	9
INI		6	45	51	28	99	127	34	144	178
INH			5	5	55	62	117	55	67	122
DGPE		9	37	46	27	29	56	36	66	102
OTRAS		1	17	18	11	39	50	12	56	68
TOTAL		*16*	*104*	*120*	*121*	*229*	*350*	*137*	*333*	*470*

No R. No remitidas R. Remitidas T: Total

La elaboración del censo de Sociedades se ve dificultada por la no existencia de un Registro de Sociedades Estatales. Una circunstancia que añade dificultad a esta tarea, es que el preceptivo acuerdo de Consejo de Ministros (artº 6.3 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria) para crear o tomar participación mayoritaria en una sociedad haciendo que esta adquiera el carácter de Sociedad Estatal o que teniendo tal carácter lo pierda no es de obligatoria publicación. Otra dificultad añadida es que al amparo de la Ley 37/1988 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 cuando en los Planes de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) se contempla efectuar inversiones o desinversiones, como dichos PAIF son aprobados preceptivamente por Acuerdo de Consejo de Ministros, en el mismo acto se da por autorizada la creación de las sociedades que se prevean en el PAIF. Todavía se dificulta más la labor cuando no se respeta aquella norma; así se ha constatado que la adquisición de la participación mayoritariaes de forma directa o indirecta de la "E.N. de Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A." (MERCASA) en once sociedades que habían sido constituidas o adquiridas, con tal participación mayoritaria en 1987, 1988 y 1989, se aprueba en acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 1990.

En el Informe anual correspondiente a 1989, se hacía referencia a la apertura de información reservada (por OO.MM. de Economía y Hacienda), para el esclarecimiento de las posibles responsabilidades contables en que pudieran haber incurrido los Presidentes de las Sociedades cuyas cuentas correspondientes a los ejercicios de 1986 y 1987 no se habían rendido a este Tribunal. Dichos expedientes de información reservada, según se ha comunicado a este Tribunal por el Ministerio de Economía y Hacienda, se archivaron al determinarse que no se evidencian indicios racionales de la existencia de hechos que hayan podido dar lugar a un posible daño a la Hacienda Pública, y por ende la no existencia de responsabilidad contable.

Todos los Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1990 de las Sociedades estatales no financieras, que se unen a la Cuenta General del Estado, fueron sometidos a examen y comprobación, solicitándose aclaraciones y practicándose comprobaciones en la sede de las entidades cuando se ha considerado necesario. Al mismo examen, fueron sometidos los estados financieros correspondientes a 1986, 1987, 1988, y 1989 de 69 Sociedades, que por haber rendido sus cuentas con posterioridad al cierre del Informe Anual de 1989, no se pudieron incorporar al mismo.

IV.1.1.1.- Cuentas no rendidas de ejercicios anteriores

De las sociedades que se relacionaban en el informe anual correspondiente a 1989 como que no habían rendido sus cuentas, continúan sin rendir las de dicho año las siguientes sociedades:

- Apeadero S.L.
- Asfaltos del Norte
- Baque S.A.
- Barajas
- Bay of Byscay
- Begoña
- C.T.M.(*)
- Campsa Estaciones de Servicio S.A.
- Carburantes La Cañadas
- Cars
- Centr. Dist. Vallés occidentales S.A.
- Comercial Chile S.A.
- Destilería Cazalla S.A.
- Dirsa S.A.
- E.S. Las Lomas S.L.
- Eléctricas de Zaragoza S.A.
- Elsorbe S.A.
- Enecuri S.A.
- Estella
- Financiera Automotriz Pegaso
- Gas y Electricidad S.A.
- Gas Navarra S.A.
- Gas Ejido S.A.
- Gas Huesca S. A.
- Gas Burgos S.A.
- Gaslu S.A.
- Gasolina del Polígono S.L.
- Hinia S.A.
- Hispanoil, USA(*)
- I. Activas y Compras(*)
- Industrias Mediterráneas de la Piel S.A.
- Integración Comercial Alimentaria S.A.(*)
- Lactarea Montañesa Sam S.A.
- Lignitos S.A.
- Marín Martín Forero S.L.
- Merco of América Inc.
- Mercocastellón S.A.
- Mercodistribución S.A.(*)
- Mercojaén S.A.
- Naviera Golfo de Vizcaya
- Novamor S.A.
- Olespan(*)
- Orillamar S.A.
- Ornime Saile S.A.
- Pazos S.A.
- Petróleos del Norte S.A.
- Petronor Distribución S.A.
- Productos Murcianos Alimentarios S.A.
- Puente la Reina S.L.
- Rainclasa
- Repsol Polivar S.A.
- Restaurante Noroeste
- Ricfruit S.A.
- Ripoll S.L.
- S.S. De Elorriaga
- Sabadell-Tarrasa
- San Cristóbal Egea
- Santa María S.L.
- Sdad. De Estiba y Desestiba Puerto Marín S.A.
- Sebastián de la Fuente S.A.
- Servicio de Venta Automática S.A.
- Sifesa
- Socamp S.A.
- Soler y Mora S.A.
- Su Eminencia S.A.
- Tabacanaria S.A.
- Tabapress S.A.
- Taberne S.L.
- Texsa
- Vertice Albacete
- Vilapreser S.A.

Correspondientes al ejercicio de 1988 continúan sin rendirse las cuentas de las siguientes Sociedades:

- Lignitos, S.A.
- Productos Murcianos Alimentarios, S.A.
- Pegaso Sur, S.A.
- Gas y Electricidad, S.A.
- Destilería Cazalla, S.A.
- Carburantes, S.A.
- Mercodistribución de Alimentos de España, S.A.
- Mercocastellón, S.A.
- Merco of América, S.A.
- Rest. Noroeste.
- Olespan A.G.(*)
- Mercojaén, S.A.
- Lactaria Montañesa Sam, S.A.

IV.1.2.- RESULTADO DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS

Del examen de las cuentas rendidas por las Sociedades estatales no financieras correspondientes a 1990 se deduce que hay 161 en las que el saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es acreedor. La suma (no consolidada) de estos saldos asciende a 291.784 millones de pesetas. Las cinco sociedades con mayor beneficio son:

- E. N. de Electricidad S.A.	68.191	millones	de	pesetas
- Repsol S.A.	43.044	"	"	"
- Repsol Petróleo S.A.	34.820	"	"	"
- Instituto Nacional de Hidrocarburos	22.446	"	"	"
- Tabacalera S.A.	12.230	"	"	"

En 114 el saldo de la cuenta de Perdidas y Ganancias es deudor. La suma (no consolidada) de estos saldos deudores asciende a 127.230 millones de pesetas. Las cinco sociedades que presentan mayores pérdidas son:

- Instituto Nacional de Industria	20.469	millones	de	pesetas
- E. N. de Autocamiones S.A.	14.947	"	"	"
- Iberia Líneas Aéreas de España S.A.	13.946	"	"	"
- Mercados en Origen S.A.	8.728	"	"	"
- E. N. Santa Bárbara S.A.	7.790	"	"	"

Hay otras 58 Sociedades que presentan saldo cero en su cuenta de Pérdidas y Ganancias, debido, en unos casos, a que la subvención a la explotación concedida en virtud de su legislación específica se adecua a la Cuenta de Resultados, de manera que ésta presente saldo cero, y en otros a la falta de actividad empresarial.

Respecto a los ejercicios anteriores, de los que se unen las cuentas de 69 sociedades, hay 17 en las que el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias es acreedor, 25 que presentan en dicha cuenta un saldo deudor y otras 27 sociedades que presentan saldo cero.

Un 11% de las Sociedades estatales no financieras que han rendido sus cuentas, presentan a 31 de diciembre de 1.990 un neto patrimonial negativo. Todas ellas se hallan incursas en los supuestos que contemplan los artículos 163 y 260.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, como causa de obligatoria reducción de capital y de disolución de las sociedades, salvo que se subsane esta situación.

Las cinco sociedades que presentan el neto patrimonial negativo mas elevado son:

- E. N. Santa Bárbara S.A.	11.104	millones	de	pesetas
- E. N. de Autocamiones S.A.	9.444	"	"	"
- Mercados en Origen S.A.	8.492	"	"	"
- Potasas de Navarra S.A.	4.034	"	"	"
- Repsol Exploración Norway A/S	2.885	"	"	"

El resto de sociedades, entre las que han rendido sus cuentas, presentan neto patrimonial positivo (89%). Las cinco que lo tienen mas elevado son:

- E. N. de Electricidad S.A.	384.733	millones	de	pesetas
- RENFE	379.277	"	"	"
- Repsol S.A.	346.123	"	"	"
- Instituto Nacional de Hidrocarburos	270.725	"	"	"
- Instituto Nacional de Industria	264.767	"	"	"

IV.1.2.1.- Análisis de Estados Consolidados

El Balance y la Cuenta de Resultados consolidados, elaborados por el INI y el INH, correspondientes al ejercicio de 1990, cuyo envío a este Tribunal ha sido requerido de aquéllos en su momento, se incorporan comparados con los estados referidos a 1989 como Anexos IV.1-1 a IV.1-4.

IV.1.2.1.1.- Instituto Nacional de Industria

El Instituto Nacional de Industria (INI) ha preparado las cuentas anuales consolidadas del Grupo INI, al 31 de diciembre de 1990, con criterios homogéneos a los del ejercicio anterior, a partir de los registros contables tanto del propio Instituto como de las sociedades en las que éste posee una participación directa o indirecta superior al 50%.

La adaptación de la contabilidad de las sociedades del Grupo a la nueva legislación (Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas), ha supuesto diferencias de valoración y clasificación de las partidas de las cuentas anuales, dificultando el análisis comparativo de las cuentas anuales consolidadas del Grupo INI al 31 de diciembre de 1990 con las de igual fecha del ejercicio anterior.

Para la elaboración de las referidas cuentas anuales consolidadas, el INI ha seguido el método de integración global en el caso de sociedades participadas mayoritariamente. Se han exceptuado algunas filiales de participación mayoritaria, pero con escasa importancia dentro del contexto económico del Grupo, figurando dichas participaciones en el inmovilizado financiero del balance consolidado. Las participaciones comprendidas entre el 50 y el 20% del capital de la sociedad, si no cotizan en bolsa, o igual o superior al 3%, si cotizan en bolsa, en general se han consolidado por el procedimiento de puesta en equivalencia. Como paso previo en la consolidación del Grupo INI, se han formalizado las cuentas anuales consolidadas de cada una de las empresas con sus filiales que se consolidan y se han utilizado dichas cuentas anuales para elaborar las del Grupo.

Las sociedades incluidas en la consolidación por integración global, en el ejercicio de 1990, son 99 más el organismo matriz,

que con respecto al ejercicio anterior suponen un aumento de 14 sociedades (se han incorporado a la consolidación 15 sociedades, y una ha causado baja). La incorporación de las sociedades al método de Integración global se debe a varias causas entre las que destacan el paso a ser controladas en más del 50%, y el incremento de actividad que han desarrollado en este ejercicio respecto al ejercicio anterior.

Sin embargo, se estima que esta variación en las empresas cuyas cuentas anuales han sido objeto de consolidación no distorsiona significativamente las conclusiones obtenidas, especialmente en lo que se refiere a los análisis individualizados por empresas de las diferencias producidas.

Del estudio de las rúbricas que figuran en las cuentas anuales se han deducido las siguientes consideraciones:

a) El inmovilizado material, sin deducir amortizaciones, al 31 de diciembre de 1990 era de 3.714.622 millones de pesetas, con un incremento del 7% respecto al de la misma fecha del ejercicio anterior. La amortización acumulada al finalizar el ejercicio de 1990 se elevaba a 1.485.033 millones de pesetas y representaba el 40% de la inversión después de realizar una dotación durante el ejercicio al fondo de amortización acumulada de 182.139 millones de pesetas. En la variación que surge respecto al ejercicio anterior de 156.255 millones de pesetas hay que considerar además de la dotación anual las bajas ocasionadas por venta de inmovilizado.

Las inversiones en este área durante el ejercicio de 1990 fueron de 299.641 millones de pesetas, de cuyo importe el 54% corresponde a las sociedades siguientes: "Iberia Líneas Aéreas de España, S.A."(IBERIA), "E.N. de Electricidad, S.A." (ENDESA), "Unión Eléctrica de Canarias, S.A." (UNELCO); "Red Eléctrica de España, S.A." (REDESA), cuyas inversiones ascendieron respectivamente a 75.885, 38.161, 32.148 y, 18.196 millones de pesetas, siendo de señalar que las inversiones realizadas en IBERIA corresponden en un 80% a renovación y adquisición de flota, y las de las sociedades de ENDESA y UNELCO a la construcción de centrales hidráulicas, térmicas y nucleares, así como al transporte, transformación y distribución de energía. REDESA materializó las inversiones en la construcción de subestaciones y de nuevas líneas de distribución de energía.

Las bajas por desinversiones, saneamientos y traspasos ascendieron a 22.416 millones de pesetas de valor neto contable, de cuya cifra 8.932 millones de pesetas corresponden a desinversiones, localizadas principalmente en las sociedades "Construcciones Aeronáuticas, S.A." (CASA), IBERIA, ENDESA. Los saneamientos, por importe de 6.891 millones de pesetas, se han originado principalmente en la sociedad de "Astilleros Españoles, S.A." (AESA) por importe de 6.000 millones de pesetas. Los traspasos, evaluados en 6.593 millones de pesetas, se localizan en IBERIA por motivo de la reclasificación de los bienes adquiridos en régimen de "leasing" a la partida de Inmovilizado Inmaterial correspondiente, siguiendo la normativa del nuevo Plan General de Contabilidad.

Las variaciones anuales brutas más importantes, en términos cuantitativos, corresponden a las partidas de Instalaciones complejas especializadas, con 61.947 millones de pesetas, Maquinaria, instalaciones y utillajes, con 46.855 millones de pesetas e Inmovilizado material en curso, con 45.920 millones de pesetas.

b) El Inmovilizado inmaterial neto a fin de ejercicio ascendía a 29.955 millones de pesetas, de cuyo importe el 60% corresponde a proyectos de investigación y desarrollo (I+D).

Las inversiones realizadas se elevaron a 9.960 millones de pesetas, destacando las realizadas en CASA, en "E.N. de Electrónica y Sistemas S.A." (INISEL), en "E.N. Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A." (STA. BARBARA), y en IBERIA, que importaron 2.352, 1.435, 1.235 y 1.111 millones de pesetas, respectivamente. Los importes mencionados corresponden básicamente a la realización de diversos proyectos de I+D. La dotación anual aplicada en concepto de amortización del inmovilizado inmaterial del Grupo fue de 5.002 millones de pesetas. El resto de la variación que se observa al comparar los balances de los dos ejercicios es debido a la adaptación al nuevo Plan General de Contabilidad.

c) El saldo del inmovilizado financiero al 31 de diciembre de 1990 se elevaba a 185.477 millones de pesetas.

La composición del saldo final de esta partida es la siguiente: a) las participaciones financieras del Grupo en empresas no incluidas en la consolidación se elevaron a 107.191 millones de pesetas. b) Los préstamos y títulos de renta fija alcanzaron los 71.666 millones de pesetas y c) Las fianzas y depósitos a 6.620 millones de pesetas.

El saldo de las participaciones financieras ha disminuido respecto al del ejercicio anterior en 20.474 millones de pesetas. Las principales desinversiones se han materializado en las siguientes sociedades:

SEAT por el cumplimiento del compromiso de WOLKSWAGEN de adquirir la participación que el INI poseía en esta sociedad del 24'98% por importe de 19.990 millones de pesetas.

"Campos Velázquez, S.A." que en este ejercicio ha sido objeto de consolidación por integración global, y en el anterior figuraba en el inmovilizado de IBERIA.

"Unión Eléctrica-Fenosa, S.A." (UEFSA) de la que ENDESA tenía porcentaje de participación del 6'7% y lo ha reducido al 5'68% de su capital social.

El principal incremento de las participaciones financieras tuvo lugar en INISEL, que pasó a tener una participación del 9'89% del capital (a comienzos del ejercicio tenía el 8'49%) de la sociedad AMPER con un coste de 759 millones de pesetas. Por otra parte se han obtenido nuevas participaciones por varias sociedades del Grupo INI en sociedades fuera del Grupo.

El aumento de provisiones en 7.708 millones de pesetas ha tenido lugar por la desvalorización producida al final del ejercicio de varias empresas en las que Empresas del Grupo INI poseen participaciones en su capital. Destacan la participación de ENDESA en "Sevillana de Electricidad, S.A.", que se provisionó por 2.232 millones de pesetas, en tanto que la provisión de la participación de ENASA en SEDDON y la de INISEL en AMPER se incrementaron por 673 y 467 millones de pesetas, respectivamente. También se han provisionado algunas de las nuevas participaciones realizadas durante este ejercicio, y en sentido opuesto se han anulado provisiones anteriormente constituidas debido a la desaparición de las circunstancias que motivaron dichos ajustes de valor.

Los préstamos y títulos de renta fija se desglosan en 37.299 y 39.965 millones de pesetas, respectivamente.

El saldo de la partida de títulos de renta fija corresponde en casi su totalidad a "MUSINI Sociedad Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija" (MUSINI) por importe de 38.354 millones de pesetas, siendo el principal concepto de estas inversiones, obligaciones y títulos de renta fija ya que su objetivo es garantizar una rentabilidad a sus reservas técnicas.

Los préstamos corresponden principalmente a las sociedades de MUSINI, IBERIA, ENASA y ENUSA, por importes de 8.057, 5.989, 3.960 y 4.196 millones de pesetas respectivamente.

d) El saldo de los gastos amortizables a 31 de diciembre de 1990 ascendía a 41.840 millones de pesetas. Los abonos realizados durante el ejercicio por amortizaciones y saneamientos, se han elevado a 5.292 y 18.738 millones de pesetas, respectivamente, en tanto que los gastos plurianuales capitalizados ascendieron a 5.971 millones de pesetas.

Entre los saneamientos destacan los realizados por las sociedades "E.N. Bazán de Construcciones Navales Militares, S.A." (BAZAN), "Babcock Wilcox Española, S.A." (BWE) y "Grupo de Empresas Alvarez, S.A." (GEASA) por importes de 9.000, 4.500 y 4.000 millones de pesetas, respectivamente.

Las capitalizaciones más importantes tuvieron lugar en las sociedades "Fábrica de San Carlos, S.A." (F.S.C.), BAZAN y "E.N. Adaro de Investigaciones Mineras S.A." (ENADIMSA), por importes de 900, 759 y 522 millones de pesetas, respectivamente.

e) El pasivo no exigible del Grupo, al 31 de diciembre de 1990, excluido el resultado del ejercicio, ascendía a 516.091 millones de pesetas, con una disminución del 9% respecto al de igual fecha del ejercicio anterior.

Analizado por conceptos, el detalle del saldo al final de cada ejercicio es el siguiente:

(Millones de pesetas)

	31/12/89	31/12/90	Diferencia
Fondo patrimonial	311.091	311.482	391
Otras reservas restringidas	3.658	--	(3.658)
Reservas de libre disposición	8.594	--	(8.594)
Resultados negativos anteriores	--	(26.245)	(26.245)
Reservas de consolidación	214.740	189.468	(25.272)
Subvenciones de capital	18.307	29.356	11.049
Diferencias negativas de consolidacion [2]	9.765	12.030	2.265
	566.155	516.091	(50.064)

La variación producida en el saldo de "Reservas de consolidación" se originó al comparar los valores patrimoniales de las empresas, cuyas cuentas anuales fueron consolidadas, con el coste de las respectivas participaciones accionarias, cifra que sufrió variación debido principalmente a la adaptación de las sociedades del Grupo a la legislación actual, aplicando la disposición transitoria primera del R. D. 1643/1990 de 20 de diciembre.

La partida de Resultados negativos anteriores corresponde al crédito fiscal estimado del Grupo consolidado a efectos de tributación por el Impuesto sobre Sociedades, que al 31 de diciembre de 1989 se decidió cancelar [3] en atención al empeoramiento de las previsiones de resultados de las empresas del Grupo, para los próximos años, minorado por la aplicación de las partidas de Otras reservas restringidas y Reservas de libre disposición por importes de 3.658 y 8.594 millones de pesetas, respectivamente.

Las Diferencias negativas de consolidación corresponden a las sociedades "Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A." (ERZ) por importe de 9.765 millones de pesetas e "Industria Española del Aluminio, S.A." (INESPAL) por 2.265 millones de pesetas (importe que corresponde al incremento de esta partida).

El incremento de las subvenciones de capital, corresponde principalmente a las subvenciones recibidas por las sociedades HUNOSA y ENUSA por importes de 2.519 y 3.165 millones de pesetas aportadas por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), "Compañía Trasatlántica Española, S.A." (C.T.E.) por importe de 1.020 millones de pesetas aportados por el Ministerio de Industria y "E.N. Elcano de la Marina Mercante, S.A." (ENE) por 3.004 millones de pesetas recibidas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

---

2 En el ejercicio 1989 se denominaba diferencias pasivas de consolidación.

3 véase apartado IV.1.2.1.1.e del Informe Anual de 1989

f) Los resultados del Grupo INI en el ejercicio de 1990 presentaron una pérdida de 63.172 millones de pesetas, lo que supone un incremento de 21.269 millones de pesetas respecto a la experimentada en el ejercicio anterior. Los resultados de la explotación fueron negativos en 6.511 millones de pesetas mientras que en el ejercicio anterior presentaba un resultado positivo de 52.138 millones de pesetas. Los gastos de explotación se han incrementado en el 7'7%, respecto de los del ejercicio de 1989, con aumento del 8'7 y 11% en los capítulos de Personal y Trabajos, suministros y servicios exteriores.

Los ingresos de explotación experimentaron un incremento del 4'6%, respecto a los del ejercicio anterior, debido principalmente a un aumento del 3'5% en las ventas totales (los del mercado nacional se incrementaron en un 3% y las exportaciones en el 4'3%).

El saldo que recoge la cuenta del Impuesto sobre sociedades por importe de 5.442 millones de pesetas corresponde a los impuestos a pagar por aquellas empresas no incluidas en la consolidación fiscal. La diferencia que surge con respecto al ejercicio anterior se debe principalmente a saneamientos de activo al encontrarse contabilizado en esta partida el importe estimado como recuperable del crédito fiscal generado entre los ejercicios 1986 y 1988, y que al final del ejercicio de 1989, en función del cambio en las expectativas de resultados de las empresas del Grupo para los próximos años, se consideró prudente su cancelación (como se indicó anteriormente).

El resultado imputable a los accionistas minoritarios fue positivo por un importe de 31.088 millones de pesetas, correspondiendo la mayor parte de dicho importe a los accionistas minoritarios de ENDESA.

g) A partir del ejercicio de 1986, el INI y las empresas participadas directa o indirectamente por el mismo en más del 90% se acogieron al régimen de tributación consolidada por el Impuesto sobre Sociedades.

La Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, en su artículo 123.5, extendió dicho régimen de tributación consolidada a las empresas en las que la participación del Instituto era mayoritaria, señalando que las inclusiones y exclusiones del Grupo se producirán en el mismo ejercicio en el que el INI adquiera o pierda, según los casos, la condición de socio mayoritario. Esta ampliación en el número de empresas acogidas al mencionado régimen tributario, se comenzó a aplicar a partir del ejercicio de 1988, según lo autorizado por la indicada Ley.

En los años en los que se ha presentado declaración consolidada se han originado bases imponibles negativas cuyo importe total, al 31 de diciembre de 1990, ascendía a 755.111 millones de pesetas, crédito fiscal que el Grupo INI dispone frente a la Hacienda Pública para compensar con futuros beneficios. Dicha compensación podrá efectuarse con eventuales bases imponibles del citado Impuesto, de signo positivo, que se liquiden en los cinco años siguientes a la generación de cada una de las citadas bases negativas.

Por otra parte, las empresas consolidadas mantienen pérdidas compensables fiscalmente de forma individual correspondientes a los ejercicios anteriores a su incorporación al nuevo régimen tributario, por un total aproximado de 395.547 millones de pesetas.

IV.1.2.1.2.-Instituto Nacional de Hidrocarburos

El Grupo de sociedades adscritas al Instituto Nacional de Hidrocarburos, ha formalizado las cuentas anuales consolidadas correspondientes al mismo y referidas al ejercicio de 1990 siguiendo criterios homogéneos a los del ejercicio anterior, a partir de los registros de contabilidad del propio Instituto y de las principales sociedades filiales en las que éste posee una participación, directa o indirecta, superior al 50%. Para la elaboración de las Cuentas Anuales de las sociedades consolidadas se han seguido los principios contables y normas de valoración contenidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre.

Se estima, no obstante, que el análisis comparativo de las cuentas anuales del Grupo INH al 31 de diciembre de 1990 con las de igual fecha del ejercicio anterior no queda desvirtuado por la aplicación de las nuevas normas de valoración y clasificación de cuentas.

Para la formación de las cuentas anuales citadas se ha seguido el método de integración global para la consolidación contable de las correspondientes a las sociedades participadas mayoritariamente por la entidad matriz y el de puesta en equivalencia para la consolidación de las de aquellas sociedades en las que la participación de la entidad dominante está comprendida entre el 20 y el 50% del capital social si no cotiza en Bolsa o bien si es igual o superior al 3% si la sociedad cotiza en Bolsa. Se han excluido algunas filiales de participación mayoritaria, pero con escasa importancia dentro del Grupo, cuyas participaciones aparecen recogidas en el epígrafe del inmovilizado financiero.

A los efectos del proceso de consolidación contable, el Grupo está constituido por la entidad matriz (Instituto Nacional de Hidrocarburos) por 54 sociedades de participación mayoritaria, con incorporación de 14 sociedades respecto al ejercicio anterior (en 3 sociedades se ha obtenido la adquisición de participación mayoritaria por el INH y el resto han sido constituidas durante el ejercicio por el Grupo Repsol) y por 24 sociedades de participación comprendida entre el 20% y el 50% del capital social.

Del análisis de las cuentas que figuran en los estados financieros referidos se han deducido las siguientes consideraciones:

a) El inmovilizado material bruto al 31 de diciembre de 1990 ascendía a 1.274.674 millones de pesetas, con un incremento del 12'5% respecto al de la misma fecha del ejercicio anterior.

Las variaciones anuales más importantes, en términos cuantitativos, se han puesto de manifiesto en los conceptos siguientes:1) En maquinaria e instalaciones, 96.124 millones de pesetas. 2) En terrenos, edificios y otras construcciones, 9.173 millones de pesetas. 3) En inversiones para exploración y prospección de hidrocarburos, 5.641 millones de pesetas.

El saldo de las inversiones en exploración y prospección de hidrocarburos a fin de ejercicio ascendía a 133.593 millones de pesetas, 51.723 millones de pesetas correspondían a la inversión ejecutada en el extranjero y 81.870 millones de pesetas a la ejecutada en España. Esta inversión ha contado con 22.471 millones de pesetas de subvenciones del Sector Público.

b) El inmovilizado financiero del Grupo experimentó un incremento de 15.735 millones de pesetas, equivalente al 13% del saldo de esta cuenta al principio del ejercicio. La variación anual de este saldo se debe principalmente al aumento de la partida de Fondo de Comercio por un importe de 30.066 millones, que registra la diferencia existente entre el precio pagado en la adquisición de sociedades filiales y el valor teórico-contable de dichas sociedades, ajustado, en su caso, por la valoración específica hecha de sus activos y pasivos. Se amortiza en un período de diez años, considerando este período como el plazo medio de recuperación de las inversiones realizadas. El saldo a fin de ejercicio pendiente de amortizar era de 39.725 millones de pesetas, destacando las sociedades filiales de "Cimalgas, S.A.", Grupo CARLESS y "Catalana de Gas, S.A.", por importes de 18.148, 5.363 y 4.726 millones de pesetas, respectivamente. Esta cuenta fue objeto de saneamiento durante el ejercicio por un importe de 4.063 millones de pesetas.

Otras variaciones anuales en este epígrafe son las disminuciones de las cuentas que recogen la inversión en sociedades participadas y en renta fija y préstamos a otras sociedades por importes de 11.160 y 9.058 millones de pesetas, respectivamente.

c) La cuenta de gastos amortizables presentaba un saldo a fin de ejercicio de 10.663 millones de pesetas. Las diversas subcuentas que la componen registraban los siguientes saldos: 1) Diferencias por fluctuación de cambios, con un importe de 2.776 millones de pesetas. 2) Gastos de financiación del contrato de suministro de gas de Argelia, suscrito por la "E.N. del Gas, S.A." (ENAGAS), con un importe de 6.034 millones de pesetas. 3) Otros gastos amortizables por importe de 1.853 millones de pesetas.

d) La cuenta correspondiente al Fondo Patrimonial del Instituto forma parte de la rúbrica denominada financiación propia del Grupo. Su valor, de 136.083 millones de pesetas no ha experimentado ninguna variación con respecto al ejercicio anterior. Su función económico-financiera es análoga a la del capital social en las entidades mercantiles, y está constituido por la dotación fundacional, por las sucesivas transferencias de capital asignadas en los Presupuestos Generales del Estado y por el contravalor de ciertas aportaciones de activos no monetarios efectuadas por el Patrimonio del Estado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de Reordenación del Sector del Petróleo.

e) Financiación de parte de las inversiones efectuadas en exploración de reservas energéticas.- Esta modalidad de financiación está contabilizada formando parte de la que es propia del Grupo. Registra las subvenciones oficiales otorgadas al INH con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para financiar los proyectos de exploración de hidrocarburos.

Cuando los proyectos de explotación financiados con cargo a estos fondos se califican como positivos (tras la tramitación y resolución del correspondiente expediente en el Ministerio de Industria y Energía) sus importes se consideran reintegrables al Estado y se procede a su devolución en función de los excedentes de tesorería generados por las operaciones de los correspondientes proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. Cuando los proyectos se califican como fallidos o negativos, la inversión realizada en ellos se considera no reintegrable y su importe es, por consiguiente, dado de baja en cuenta (se carga a esta cuenta con abono a la de inmovilizado material) a fin de registrar de esta forma la pérdida patrimonial que ello supone.

Durante el ejercicio se declararon fallidos proyectos cuyo coste ascendió a 3.892 millones de pesetas. El saldo final de 1990 está constituido por 20.147 millones de pesetas, correspondientes a proyectos en curso, y por 2.324 millones de pesetas referentes a proyectos calificados como reintegrables.

f) Los resultados consolidados del Grupo fueron de 121.695 millones de pesetas, de los que 36.002 millones de pesetas se han dotado como gastos para atender al pago del Impuesto sobre Sociedades y 33.579 millones de pesetas correspondieron a los accionistas minoritarios. En 1990 el beneficio después de impuestos disminuyó el 29'2% con relación al del ejercicio anterior. El margen de beneficio anual sobre las ventas totales del Grupo fue del 5'5% en el año 1990 y del 10'2 en el ejercicio anterior.

g) Aportaciones a cuenta al Tesoro Público.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de constitución del Instituto Nacional de Hidrocarburos, éste deberá aportar al Tesoro Público una parte de sus beneficios anuales, la cual no será inferior al 50% de éstos. Durante el ejercicio de 1990 el Instituto ingresó en el Tesoro, a cuenta de resultados del mismo, la cantidad de 23.337 millones de pesetas, cantidad superior en 891 millones de pesetas, al beneficio obtenido.

h) Cuenta de relaciones con el Estado por operaciones corrientes.- Esta cuenta recoge en su movimiento las transacciones habidas entre el Monopolio del Petróleo y CAMPSA[4] (sociedad participada mayoritariamente por "REPSOL S.A."). Se registran en ella las operaciones que CAMPSA realiza por cuenta del Monopolio por cuya prestación recibe la correspondiente retribución.

El saldo final anual depende, en su signo, de la forma en que durante el ejercicio se hayan liquidado las operaciones recíprocas. Debido a que no se habían compensado todos sus débitos a 31 de diciembre de 1990, esta cuenta presenta saldo acreedor por importe de 18.572 millones de pesetas, mientras que en 1989 registraba, por el contrario, saldo deudor.

i) La financiación básica del Grupo (fondos propios, resultados no distribuidos y fondos ajenos a largo plazo) alcanzó los 750.611 millones de pesetas de la que el 88 por 100 corresponde a fondos propios y el 12 por 100 restante a fondos ajenos. Con tales fondos resulta financiado en un 96 por 100 el inmovilizado del Grupo.

El fondo de maniobra a fin de 1990 era negativo en 28.293 millones de pesetas, con una reducción de 54.012 millones de pesetas con respecto al existente al final del ejercicio anterior.

IV.1.2.2.- Análisis individualizado de ciertas cuentas

En este ejercicio de 1990, hay que destacar la gran incidencia que tiene para las Sociedades Mercantiles la aprobación de la Ley 19/1989 de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de Sociedades y, posteriormente, al amparo de la Disposición Final 1ª la aprobación del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se promulga el Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, que tienen su entrada en vigor el 1º de enero de 1990. Todo ello unido a la aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad, promulgado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre y aplicable obligatoriamente a los ejercicios que se inicien con posterioridad al 31 de diciembre de 1990, hace que este ejercicio de 1990, sea de transición en cuanto a la contabilidad de las empresas, con los problemas que conlleva adaptar una actuación a un plan antiguo y modificado teniendo luego que volver a adaptarla al plan nuevo.

Del análisis individualizado de las cuentas se han observado las siguientes anomalías:

a) El artículo 35.2 del Código de Comercio establece la obligatoriedad de distinguir los resultados ordinarios propios de la explotación, de los que no lo sean o de los que se originen en circunstancias de carácter extraordinario. Se han advertido incumplimientos a este artículo en:

- **"Repsol Derivados, S.A."**, al clasificar como subvenciones de explotación 16 millones de pesetas que tenían el concepto de subvenciones en Capital, que al transferirse al ejercicio deberían figurar como Resultado Extraordinario y no de explotación.

- **"Repsol Butano, S.A."**, al registrar como tributos (Cuenta integrada en Resultados ordinarios de explotación) 900 millones de pesetas correspondientes a actas de inspección de ejercicios anteriores; cuando deberían figurar como Resultados Extraordinarios.

- **"E.N. Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A."**, al registrar 727,3 millones de pesetas en la Cuenta "Variación de las provisiones de inversiones financieras", englobada en el resultado ordinario de la Empresa, cuando por corresponder esta variación a participaciones en empresas del grupo y asociadas, debería haberse incluido como resultado extraordinario de la Compañía.

b) El artículo 35 del Código de Comercio, en su punto sexto, prohíbe la compensación entre partidas del Activo y del Pasivo, o entre las partidas de gastos e ingresos. Esta instrucción se ha quebrantado en los siguientes casos:

- Por las sociedades **"Repsol Derivados, S.A."**, **"Repsol, S.A."**, **"Repsol Exploración, S.A."** y **"Petrodis, S.A."**, al registrar su participación en el capital de otras sociedades por el importe desembolsado, en lugar de registrar en el inmovilizado financiero el precio de adquisición de los títulos y en una cuenta del pasivo del balance los desembolsos pendientes sobre dichos títulos.

- Por las sociedades **"Iberia Líneas Aéreas de España, S.A."**, **"E.N. del Gas, S.A."**, y **"E.N. Siderúrgica, S.A."**, que han capitalizado durante el ejercicio 1990 gastos financieros en su inmovilizado material. Dicha capitalización la han registrado minorando el importe de sus gastos financieros directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, en lugar de abonar a una cuenta de ingresos, por lo que han reducido el importe de los gastos financieros del ejercicio.

- También se ha comprobado que las sociedades **"Repsol Butano, S.A."**, **"E.N. del Gas, S.A."**, **"E.N. de Celulosas, S.A."**, **"Aviación y Comercio, S.A."**, y **"E.N. Siderúrgica, S.A."**, han efectuado compensación de ingresos y gastos extraordinarios, o de partidas de activo y pasivo del balance.

c) El Nuevo Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece en su capítulo VII, de las cuentas anuales, la estructura que ha de tener tanto el Balance (sección segunda) como la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (sección cuarta) y así establece en los artículos 176,3 y 182,2 en congruencia con el 173 que se debe tener separadas las participaciones en empresas del grupo, en empresas asociadas, y el resto de las empresas; esta estricta separación no ha sido observada por la "E.N. de Transformación Agraria S.A.", "Repsol Derivados S.A.", "Repsol, Butano S.A.", "Empresa Auxiliar de la Industria S.A.", "E.N. de Mercados de Abastecimiento S.A.", "E.N. del Gas S.A.", "Repsol Petróleo S.A." y la "E.N. Bazán de Construcciones Militares S.A."

d) Otro punto que también contempla el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas es la separación entre corto y largo plazo, establecido taxativamente en su articulado (artículo 180); esta separación no la cumplen en las partidas "provisiones para riesgos y gastos" y en la de "impuestos anticipados y diferidos" las sociedades "Repsol Derivados S.A.", "E.N. de Transformación Agraria S.A.", "E.N. de Electricidad S.A.", "Repsol Butano S.A.", "E.N. de Celulosas S.A.", "Almacenes y Depósitos Aduaneros S.A.", "E.N. Bazán de Construcciones Militares S.A.", "Iberia Líneas Aéreas de España S.A." y "Astilleros Españoles S.A.".

e) En la sección tercera, "disposiciones particulares sobre ciertas partidas del Balance", del capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se establece en el artículo 186 como se deben clasificar los ajustes por periodificación tanto de activo como de pasivo, habiendo sido incumplida su normativa por las Sociedades: "Hulleras del Norte S.A.", "E.N. de Transformación Agraria S.A.", "Empresa Auxiliar de la Industria S.A.", "E.N. Mercados Centrales de Abastecimiento S.A.", "Repsol Petróleo S.A.", "E.N. Bazán de Construcciones Militares S.A.", "Iberia Líneas Aéreas de España S.A." y "Aviación y Comercio S.A." En el artículo 188 se define claramente el objeto que deberán tener las provisiones para riesgos y gastos. No han seguido este criterio las Sociedades: "Repsol Derivados S.A.", "Repsol Butano S.A.", "E.N. de Celulosas, S.A.", "Iberia líneas aéreas de España, S.A.", "Aviación y Comercio, S.A." y "Empresa Auxiliar de la Industria S.A." que dotan provisiones genéricas.

f) En la sección cuarta del precitado Capítulo del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece como deberá estructurarse la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Han incumplido esta disposición:

- **"Repsol Derivados S.A."** al registrar como "Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación" por importe de 387,4 millones de pesetas cuando 184,3 millones de pesetas corresponden a la variación de materias primas y de embalajes y envases, y deberían haber figurado minorando el consumo de materias primas en el debe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como establece tal artículo.

- La **"Sociedad Española de Carbón Exterior, S.A."**, que sigue la normativa antigua dando de baja las existencias iniciales y de alta las finales, cuando conforme al artículo 189 debía haber registrado la diferencia de existencias como un consumo de mercaderías.

- **"Repsol Butano S.A."**, **"Petrodis S.A."** y la **"E.N. Bazán de Construcciones Navales Militares S.A."**, que contabilizan la totalidad de la variación de existencias del Balance, incluida la provisión, como "variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación" cuando por corresponder la mayor parte de esta variación a "existencias comerciales", o materias primas, estas magnitudes deberían haberse contabilizado como consumos.

- La **"E.N. del Gas S.A."**, contabiliza como amortizaciones 13.621 millones de pesetas, cuando en este apartado solo debía haber contabilizado 6.642 millones de pesetas, correspondiendo la diferencia a gastos financieros. También incumple el citado artículo 189 al registrar como "aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación" la variación de Materias Primas y otros aprovisionamientos.

g) La sección quinta del tan citado Capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece una serie de reglas de valoración, y en su artículo 195 establece las del inmovilizado financiero, reglas que no han sido observadas por:

- La **"Sociedad Española de Carbón Exterior S.A."**, que no ha provisionado la participación que tiene en GRAESA contabilizada por 45,7 millones de pesetas y que según balance auditado de la sociedad participada, tendría un valor teórico contable de 42 millones, por lo que debería haber dotado una provisión por 3,7 millones de pesetas.

- **"Repsol Butano S.A."**, que no ha dotado provisión a su participación en "Gas Castilla-La Mancha S.A.", cuando debería haberla dotado por 19 millones de pesetas, manteniendo sin embargo, una provisión en exceso sobre su participación en "Gas Navarra S.A.," de 8 millones de pesetas.

- La **"Empresa Auxiliar de la Industria S.A."** que tiene infradotada la provisión por la participación que posee en EMISA en 4 millones de pesetas.

- **"Repsol Distribución S.A."**, cuya participación en "Jalter Distribución S.A." figura por 67 millones de pesetas, mientras que atendiendo al valor teórico contable de la participación debería figurar por 62,6 millones de pesetas, debiendo haber dotado "Repsol Distribución S.A." una provisión por los 4,4 millones de pesetas de diferencia.

- **"Astilleros Españoles S.A."**, también incumple este artículo por exceso y por defecto, así tiene dotada una provisión con un exceso de 25,4 millones por su participación en "Astilleros de Santander S.A." y procedería que dotase por su participación en "Navalips S.A." una provisión de 86,1 millones de pesetas.

- **"Construcciones Aeronáuticas S.A."** no ha provisionado la participación del 10,2% que tiene en "Defex S.A." contabilizada por 277,8 millones de pesetas y que según la cuenta rendida por la

4 La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A., no ha rendido sus cuentas.

misma, ascendía a 31 de diciembre de 1990 a 170,6 millones de pesetas, por lo que aquélla debería haber dotado una provisión de 107,2 millones de pesetas.

h) El "Instituto Nacional de Hidrocarburos" y el "Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial" son Sociedades Estatales pero no son Sociedades Anónimas, por ello no se puede decir que incumplan el artículo 195.2 a) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas cuando no provisionan adecuadamente sus respectivas carteras. No obstante debe señalarse que se incumplen los principios de contabilidad generalmente aceptados cuando:

- El "Instituto Nacional de Hidrocarburos", arrastra desde su constitución y sin variación alguna, la provisión de 844 millones de pesetas en relación con su participación en la "E.N. del Gas, S.A."; a la vista del valor de la participación y de las cuentas de la Empresa Nacional del Gas S.A. corresponde dar de baja la provisión existente.

Asimismo, provisionó la participación en el "Banco Saudi Español, S.A." (SAUDESBANK) por 700 millones de pesetas (cantidad que debió aportar como los demás socios en proporción a su participación para compensar la existencia de un descubierto en 7.000 millones) lo que debería haber figurado como "provisión para riesgos y gastos". Por esta misma participación no dotó una provisión de 246 millones de pesetas para adecuar el valor de adquisición con el valor teórico contable de la participación.

Tampoco dotó una provisión de 11 millones, como debería haber hecho, sobre su participación en "Euroforum-Escorial, S.A.".

- El "Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial" no tiene debidamente provisionada ni su participación en "Crilaser S.A." por 6 millones de pesetas ni la de "Eurodisplay S.A." por 9'8 millones de pesetas.

i) Las empresas del grupo INI tienen concertados gran parte de sus seguros a través de MUSINI, Sociedad perteneciente al grupo. Dado su carácter de Mutua, los asegurados tienen una participación en el fondo patrimonial de la misma, participación contabilizada en algunas empresas ("Aviación y Comercio S.A." por 154 millones de pesetas, "Iberia Líneas Aéreas de España S.A." por 966 millones de pesetas, "Astilleros Españoles S.A." por 510 millones de pesetas.....) formando parte del inmovilizado financiero lo que no parece correcto a la vista del principio contable del precio de adquisición, ya que de esta forma se producen revalorizaciones de cartera sin efectuar desembolsos que incrementen su coste.

j) Las compañías de navegación aérea IBERIA y AVIACO, amortizan los edificios e instalaciones construidas sobre terrenos propiedad del Estado en función de los períodos de concesión. Deberían amortizarlos según la vida útil estimada para el bien y simultáneamente crear un fondo de reversión para cubrir lo no amortizado al finalizar el período de la concesión.

- AVIACO, tiene dotada una provisión de 297 millones de pesetas para la revisión anual correspondiente a 1990 de parte de su flota, revisión que no fue realizada y que no podrá realizarse en el futuro, dado el carácter de revisión anual, por lo que procede que la compañía cancele dicha previsión con abono a Resultados.

k) La "E.N. de Autopistas S.A." efectuó un aumento de su capital de 2.500 millones de pesetas, en el que las acciones fueron suscritas por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 23 de enero de 1991, fecha en que debió de contabilizarse y no en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1990, aunque el acuerdo de ampliación de capital se tomase en Junta celebrada el 10 de diciembre de 1990. La legislación mercantil española exige el desembolso, al menos, del 25% del capital al efectuar la suscripción. No puede estar una suscripción pendiente de desembolso en su totalidad.

l) "Hulleras del Norte S.A." además de la anomalía reflejada en el apartado e), carece de un estudio actuarial a 31 de diciembre de 1990 que le permita determinar los pasivos devengados (no registrados en libros) por las entregas en especie al personal activo y jubilado en cumplimiento de la ordenanza laboral del sector. Asimismo es de resaltar que la empresa viene activando gastos de investigación y desarrollo y amortizando los elementos de su inmovilizado material de acuerdo con los períodos máximos a efectos fiscales y no en función de las vidas útiles económicas de las mismas. Si la empresa hubiese aplicado criterios acordes con los principios y normas contables generalmente aceptados, los fondos propios de la entidad deberían minorarse en aproximadamente 13.000 millones de pesetas.

m) Sobre "Repsol Butano S.A." además de las anomalías señaladas en los apartados a), b), c), d), e), f) y g), cabe señalar:

- Que tiene constituido un fondo de reversión por importe de 10'5 millones de pesetas, vinculado a instalaciones que no son de su propiedad por lo que debería anularlo (la empresa afirma haberlo dado de baja en 1992).

- Que imputó al ejercicio de 1990, 2.211 millones de pesetas en concepto del coste que para la misma supone el plan de reestructuración de plantilla negociado en ese año y que tenía un coste actualizado a 1 de enero de 1990 de 12.611 millones de pesetas. Los 10.400 millones restantes no estaban provisionados al cerrar el año 1990.

- Que mantiene un "stock" de existencias como garantía de abastecimiento del mercado y lo tiene contabilizado como activo circulante. Dado su carácter de permanencia debido a la función de garantía que cumple, sería más correcto contabilizarlo como inmovilizado.

n) La "Empresa Auxiliar de la Industria S.A." además de las anomalías señaladas en los apartados c), e) y g), cabe señalar:

- Que tenía registrado como "gastos de investigación y desarrollo" 55 millones correspondientes a proyectos sin expectativas de aplicación, por lo que debería haberlos cancelado con cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1990. (La Sociedad lo hizo en 1991).

- Que constituyó una provisión por importe de 127 millones de pesetas, al cancelar una antigua previsión. La citada previsión debería haberla cancelado con abono a Reservas.

ñ) La "E.N. Mercados Centrales de Abastecimiento S.A." (MERCASA) además de las anomalías reflejadas en los apartados a), c), e), y g), cabe señalar que el 15 de junio de 1990 procedió a comprar la Sociedad "Aresnor S.A." cuyo único activo eran 44.000 acciones de Elosúa S.A., que representan un 1,46% de su capital social, lo que unido a la participación que ya tenía MERCASA (un 24,88% adquirido en 1989) supera el 25% del capital de la Sociedad, por lo que de haber constituido una sola operación, hubiera exigido, de acuerdo con la legislación del Mercado de Valores, (artº60 de la Ley 24/1988, de 28 de julio y artº1 y 2 del Real Decreto 279/84 de 25 de enero)que realizase una oferta pública de adquisición de acciones (OPA).

Examinada la operación se ha comprobado que en noviembre de 1989 existía una oferta irrevocable en firme de un tercero por estas acciones a favor de MERCASA, documentada en escritura pública. En esta escritura y como garantía MERCASA desembolsa 562,3 millones de pesetas (precio total de las acciones).

Las acciones de Elosúa fueron adquiridas en 19 de junio y 13 de julio de 1989 por 535,8 millones de pesetas. La diferencia entre el precio de compra y el depositado en garantía por MERCASA se obtiene capitalizando desde el 5 de julio de 1989 (vencimiento medio de la compra de títulos) hasta el 23 de noviembre de 1989 (fecha en que se realiza la oferta irrevocable), al MIBOR (tipo de interés oferente interbancario de Madrid) el precio de compra de las acciones.

Todo ello unido a la actuación denunciada por este Tribunal en el apartado IV.1.2.2.n del Informe Anual de 1989, permite concluir que de hecho fue una sola operación y que se ha vulnerado la legislación sobre OPAS.

o) La "E.N. del Uranio S.A." dota una provisión sistemática para depreciación del terreno de la mina de uranio. Dado que la depreciación de terrenos es de carácter irreversible, aún cuando la práctica general es la de no amortizar los terrenos, en este caso concreto debería hacerse, teniendo en cuenta la vida útil de los mismos. Asimismo mantiene un "stock" de seguridad que por su carácter de permanencia, debería contabilizar como Inmovilizado en el Balance y no formando parte del Activo Circulante. En el ejercicio de 1991 esta partida ha sido reclasificada a largo plazo.

p) Sobre "Repsol Petróleo S.A." además de las anomalías reflejadas en los apartados c) y e), cabe resaltar:

- Que en aplicación de la disposición transitoria primera del R.D. 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad aflora en balance los impuestos anticipados por un importe de 3.547 millones de pesetas con abono a la cuenta "Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores", con lo que incrementa el beneficio del ejercicio en dicho cantidad, cuando debería haberlo abonado directamente a Reservas tal y como indica la precitada disposición transitoria que debe hacerse.

- Que la sociedad, imputa a los resultados del ejercicio todas las diferencias de cambio, tanto las positivas como las negativas, que se producen al valorar al cambio aplicable al fin del ejercicio los importes de créditos y deudas en moneda extranjera. Práctica correcta cuando se producen diferencias negativas, pero no para las diferencias positivas (salvo en los supuestos señalados por la norma 14.5 del Plan General de Contabilidad, que no se dan en este caso).

- Que tiene contabilizados 2.262 millones de pesetas como "provisión para impuestos" por el exceso de previsión en la distribución de resultados de ejercicios anteriores. Dado que no cubre ningún riesgo, debería este saldo ser trasladado a reservas. Idéntica práctica realiza "Repsol Derivados, S.A." que tiene en esta rúbrica un saldo de 20 millones de pesetas y debería proceder a trasladarlo a reservas.

q) La "E.N. Bazán de Construcciones Navales Militares S.A." además de las anomalías reflejadas en los apartados c), d), e) y f), cabe resaltar que aplicando incorrectamente la disposición transitoria primera del R.D. 1643/1990, de 20 de diciembre cargó 14.625 millones de pesetas a los fondos propios de la Sociedad cuando deberían haber pasado por la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1990, al ser pérdidas que con los criterios del antiguo Plan de Contabilidad deberían haber contabilizado por lo que no es de aplicación la Disposición Transitoria, lo que hubiera significado una variación sustancial en su cuenta de Resultados aunque el patrimonio neto de la Sociedad no sufriese variación.

La cuenta de Pérdidas y Ganancias también queda desvirtuada al haber considerado ingresos del Ejercicio, 1.046 millones de pesetas, por recuperaciones de ejercicios anteriores sobre el Impuesto de Sociedades que deberían haber abonado directamente a reservas.

De haber contabilizado correctamente estas dos partidas la Sociedad habría presentado un resultado con unas pérdidas de 13.006 millones de pesetas en lugar de los 2.665 millones de beneficios que presenta en sus cuentas.

r) "Repsol Exploración S.A.", además de las anomalías reflejadas en el apartado b), en 1988 adquirió una participación del 25% en "Repsol Occidental Corporation (ROC)", Sociedad dedicada a la exploración y producción de crudo en Colombia, por un importe de 31.759 millones de pesetas, de los cuales 10.605 millones correspondían al valor teórico de la participación según los libros de la Sociedad y los 21.154 millones restantes se asignaron como valor de las reservas de crudo que poseía dicha Sociedad. A fin de ejercicio, "Repsol Exploración S.A." ajusta la parte del coste correspondiente al valor teórico de la participación de acuerdo con el valor patrimonial según libros contables de ROC a 31 de diciembre, lo cual y para el ejercicio 1990, supuso la dotación de una provisión de 5.659 millones de pesetas.

No dotó, sin embargo, provisión por la parte del coste de la participación correspondiente a las reservas de crudo. A este respecto, hay que tener en cuenta que según principios de contabilidad generalmente aceptados, el importe de la valoración de reservas de crudo se deprecia de acuerdo con la producción de crudo de ROC en cada período. El importe acumulado a 31 de diciembre de 1990 de esta depreciación asciende a 4.539 millones de pesetas, de los cuales 1.784 millones corresponden al ejercicio 1990. Esta depreciación no ha sido registrada en los libros de "Repsol Exploración S.A." debido a la no consideración como gasto fiscal de dicha partida; no obstante, este importe ha sido considerado en el proceso de consolidación como un menor valor de la correspondiente inversión.

s) "Astilleros Españoles S.A." además de las anomalías reflejadas en los puntos d) y g), a la fecha de cierre del ejercicio 1990 no tiene realizado un estudio actuarial que determine el importe devengado en los ejercicios para cubrir las obligaciones en materia de pensiones contraídas por la Sociedad con su personal activo para lo que ha creado una provisión de 8.611 millones de pesetas constituida estimativamente sin datos que permitan asegurar la idoneidad de la cifra.

t) En las cuentas rendidas por "Mercados en Origen S.A.", (MERCOSA) se detectaron anomalías que no han sido solventadas a la fecha de elaboración del presente Informe Anual por la Sociedad.

u) En las cuentas rendidas por la "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre S.A." se detectaron las siguientes anomalías:

- La Sociedad tiene dotada una provisión por depreciación del Inmovilizado material de 11,4 millones de pesetas. Esta provisión se creó para cubrir los posibles gastos en concepto de reparaciones de las viviendas propiedad de la empresa y que se encuentran en régimen de alquiler, por lo que no responde al concepto de pérdidas reversibles del inmovilizado material y en consecuencia debería reclasificarse al epígrafe del pasivo del balance "Provisiones para riesgos y gastos". Además, se debería evaluar si la misma cubre en la actualidad alguna pérdida probable o cierta para la Fábrica, en caso contrario procedería dar de baja dicha provisión.

- Dentro del Inmovilizado en curso se recogen 491 millones de pesetas correspondientes a un equipo para la fabricación del DNI, adquirido en 1988 y que no se ha puesto en funcionamiento. Dado que en 1990 la Fábrica ha adquirido otro con una tecnología diferente, que es el que actualmente está en marcha, de acuerdo con un criterio de prudencia debería sanearse con cargo a Resultados extraordinarios.

- La Fábrica no ha dado de baja de su cuenta de existencias 344 millones de pesetas correspondientes a mercancías cuya venta se ha realizado y contabilizado en el ejercicio. Por tanto el beneficio del ejercicio debe disminuirse en 344 millones de pesetas.

- La Fábrica tenía registrados a 31 de diciembre de 1990 "Préstamos y deudas con entidades de crédito" por un importe de 3.034,7 millones de pesetas; sin embargo no había registrado los intereses devengados y no vencidos de dichas deudas a 31 de diciembre de 1990.

- La Fábrica no ha reflejado en su cuenta de resultados, gastos devengados en el ejercicio por un importe de 272 millones de pesetas, correspondientes a compras de materias primas y mercaderías y a comisiones de ventas. En consecuencia procedería disminuir el beneficio del ejercicio en 272 millones de pesetas.

- La Fábrica no tiene legalizados los libros.

Con independencia de todo lo anterior, es de señalar que se ha producido un incremento en las retribuciones medias por persona de un 18,9% en relación al ejercicio anterior. La Fábrica alega que dicho incremento se produjo por la reclasificación de puestos de trabajo que se realizó en 1990.

v) La "E.N. del Gas, S.A.", además de las anomalías reflejadas en los apartados b), c), y f), tiene registrado en el pasivo de su balance un "fondo de reversión" por importe de 1.823 millones de pesetas, que corresponde a un exceso de revalorización en una actualización de balances. No hay justificación económica para la existencia de este fondo por lo que procedería darlo de baja incrementando los fondos propios en tal importe.

w) Sobre "Construcciones Aeronáuticas S.A.", además de la anomalía reflejada en el apartado g), cabe formular las siguientes observaciones:

- Los gastos de investigación y desarrollo de programas aeronáuticos, en aquellos programas en que esté asegurada la venta de un número determinado de unidades, son amortizados linealmente en función de las unidades vendidas en el ejercicio, cuando el artículo 194.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas fija un plazo máximo de amortización para este tipo de gastos de cinco años.

- Los elementos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero los amortiza linealmente durante el período de duración de los contratos, en lugar de amortizarlos en función de la vida útil de los activos. Asimismo, los gastos financieros de la operación los imputa a los resultados de cada ejercicio linealmente en función de la vida útil del contrato, en vez de aplicar un criterio financiero para la aplicación a resultados de dichos gastos.

- Las subvenciones de capital se traspasan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el ritmo de amortización de los mismos con un plazo máximo de diez años, criterio que es aceptable fiscalmente pero no contablemente, ya que en el ámbito contable las subvenciones de capital deben traspasarse a resultados en función de la vida útil de los activos subvencionados.

x) Se ha examinado la contabilización derivada de la declaración fiscal consolidada del Grupo de Sociedades cuya cabecera es "Repsol S.A." que está formado por: la referida Sociedad y otras once sociedades en las que aquélla tiene una participación superior al 99%. La cuota líquida del grupo correspondiente al ejercicio 1990 ascendió a 12.485 millones de pesetas que, tras deducirle las retenciones practicadas durante el ejercicio a las sociedades del Grupo, generó una cuota a ingresar de 8.064 millones. El criterio de reparto de la cuota consolidada entre las distintas sociedades fue el siguiente:

- En empresas con cuota negativa se recuperó solamente el importe de las retenciones soportadas e ingresos a cuenta.

- El resto de cuota consolidada se repartió entre las empresas con cuota positiva proporcionalmente a su cuota individual.

No se aplicaron los ajustes por eliminaciones intragrupo practicados en la consolidación individualmente a cada una de las sociedades que los hubieren generado y además no se compensó a las sociedades que aportaban bases imponibles negativas. No obstante, hay que señalar que estas deficiencias observadas en 1990 fueron corregidas en el ejercicio 1991, en el cual el criterio de reparto de la cuota consolidada tomó en consideración los puntos anteriormente reseñados.

A 31 de diciembre de cada ejercicio, cada sociedad ha de registrar el correspondiente gasto devengado por impuesto sobre sociedades y la obligación de pago a "Repsol, S.A." por la parte correspondiente de cuota consolidada, mientras que "Repsol, S.A." tiene que contabilizar el derecho de cobro frente a sus filiales por el reparto de la cuota tributaria y simultáneamente la obligación de pago a Hacienda de la cuota tributaria consolidada de todo el grupo fiscal. Pues bien, las sociedades que tributan en régimen de declaración consolidada con "Repsol, S.A." han registrado la deuda a pagar por impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 1990 en el epígrafe "Administraciones Públicas Acreedoras", lo cual es incorrecto, ya que la cuota que cada sociedad debe pagar por impuesto sobre sociedades a la sociedad dominante debe registrarse en una cuenta acreedora abierta al efecto del subgrupo "Deudas con empresas del grupo", al ser el Grupo el sujeto pasivo frente a la Hacienda Pública y "Repsol, S.A." su representante.

"Repsol, S.A." registra la obligación de pago frente a la Hacienda Pública en el ejercicio siguiente, al presentar la declaración fiscal consolidada del impuesto sobre sociedades, y no a 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde dicha declaración. Consecuentemente, tampoco registra a 31 de diciembre el derecho de cobro frente a sus sociedades filiales por la parte que les corresponde de la cuota consolidada.

y) Se ha examinado la contabilización de la declaración fiscal consolidada del Grupo de Sociedades cuya cabecera es el Instituto Nacional de Industria formado por el propio INI y 105 Sociedades en las que su participación era mayoritaria.

La cuota líquida correspondiente al ejercicio 1990 fue de cero pesetas, al tener base imponible negativa (al igual que en los últimos cinco ejercicios en que efectuó declaración fiscal consolidada el Grupo), por lo que resultó una cantidad a devolver de 2.377 millones de pesetas correspondiente a las retenciones practicadas durante el ejercicio a las sociedades integrantes del grupo fiscal.

El criterio que fijó el INI para que las sociedades integrantes del grupo fiscal calculasen y contabilizasen el importe del gasto por impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 1990 fue el siguiente:

- De los resultados por operaciones intragrupo generados en cada sociedad del grupo, solamente se eliminaron los correspondientes a dividendos y a provisión de la cartera de valores. Lo correcto, hubiera sido eliminar todas las operaciones intragrupo para efectuar la imputación individualizada.

- Las sociedades de cuya declaración individual del impuesto sobre sociedades resulta una cuota líquida positiva, pagan esa cuota al INI, minorado dicho importe por las retenciones que les hayan practicado durante el ejercicio. Estas sociedades se practican la totalidad de las deducciones en la cuota a que hubiesen tenido derecho si hubieran realizado la declaración individual del impuesto sobre sociedades. Deberían haber aplicado deducciones exclusivamente por el importe efectivo que de las mismas sea aplicable en el régimen de declaración consolidada, y no por el importe que correspondería a cada sociedad en el régimen de tributación individual sin considerar su inclusión en un grupo fiscal consolidado, que al tener base imponible negativa en todos los ejercicios, no permite la práctica de deducciones ni bonificaciones de ningún tipo.

- En aplicación del régimen transitorio del nuevo PGC, las sociedades pertenecientes al grupo fiscal afloraron los impuestos anticipados y diferidos correspondientes a las diferencias temporales existentes a 31 de diciembre de 1989 utilizando como contrapartida cuentas del subgrupo de "Reservas". Las sociedades con base imponible positiva afloraron el 35% de las diferencias temporales, mientras que las que tenían base imponible negativa las afloraron al 35% y simultáneamente dotaron una provisión del 7%, ya que el INI sólo les aseguraba la recuperación de un 28%.

Los impuestos anticipados con origen en ejercicios anteriores a 1990 y que revirtieron en dicho ejercicio no se afloraron contra reservas, sino que directamente se llevaron contra resultados como un ingreso, considerándose como un importe negativo del gasto por impuesto sobre sociedades.

El Plan General de Contabilidad, ofrecía dos opciones para contabilizar los impuestos anticipados y diferidos generados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades. La primera opción suponía que no se registrasen los impuestos anticipados o diferidos y los créditos por pérdidas fiscales producidos antes de la entrada en vigor de la mencionada Ley, por lo que cuando se produjese la reversión de las diferencias temporales o la compensación de las bases imponibles negativas que los originaron, deberían ser tratadas como diferencias permanentes. La segunda opción daría lugar a que se registrasen, en su caso, los impuestos anticipados y diferidos y los créditos fiscales generados antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1989 tomando como contrapartida una cuenta del subgrupo de "Reservas".

Las sociedades pertenecientes al grupo no han seguido un criterio uniforme ya que mientras los impuestos anticipados y diferidos con origen en ejercicios anteriores a 1990 que no revirtieron en dicho ejercicio se afloraron con reservas como contrapartida, los que tenían su origen en ejercicios anteriores a 1990 pero revertían en dicho ejercicio no se afloraron en la contabilidad, dándoseles el tratamiento de diferencia permanente y generando por lo tanto un ingreso en la cuenta de resultados de 1990, esta práctica ha supuesto la disminución de las pérdidas de algunas sociedades en el ejercicio 1990 como por ejemplo: BAZAN en 1.046 millones de pesetas, CASA en 627 millones, IBERIA en 727 millones, etc; sin embargo no ha afectado a la situación patrimonial de dichas sociedades, ya que el ajuste se practicó contra los resultados del ejercicio en lugar de realizarse contra reservas como habría sido lo correcto.

- Las sociedades del grupo fiscal con base imponible negativa, en aplicación del principio de prudencia, no deberían registrar contablemente los impuestos anticipados, ya que su compensación en ejercicios posteriores es dudosa.

- Las sociedades con cuota positiva han registrado la deuda a pagar por impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio de 1990 en el epígrafe "Administraciones Públicas Acreedoras", lo cual es incorrecto, ya que la cuota que cada sociedad debe pagar por impuesto sobre sociedades a la sociedad dominante debe registrarse en una cuenta acreedora abierta al efecto del subgrupo "Deudas con empresas del grupo", al ser el Instituto Nacional de Industria el sujeto pasivo frente a la Hacienda Pública.

IV.1.3.- SOBRE EL GRADO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, uno, d) de la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas, se exponen a continuación los resultados deducidos del análisis que se ha efectuado sobre la ejecución de los Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF), por los cuales se ha regulado la actividad de las sociedades estatales no financieras durante el ejercicio de 1990.

Este estudio, que tiene por objeto evaluar el grado de cumplimiento de los programas mencionados, se extiende en su ámbito de investigación a los de las sociedades estatales pertenecientes a los grupos de éstas que están adscritas al Instituto Nacional de Industria (INI), al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), a la Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE) y, finalmente, a distintos Ministerios, agrupadas estas últimas entidades bajo la denominación de "Otras", al único efecto de su mención en el presente análisis.

En el cuadro siguiente figura un resumen de los valores agregados de las variables empresariales, de carácter económico y financiero, que habían sido programados para su ejecución por las entidades citadas durante el ejercicio de 1990.

PAIF DE LOS GRUPOS DE SOCIEDADES ESTATALES

(En millones de pesetas)

INVERSIONES GRUPO	EN INMOVILIZADO MATERIAL	FINANCIERAS	OTRAS	TOTAL
INI	290.340	226.456	340.866	857.662
INH	162.708	24.247	37.672	224.627
DGPE	59.205	21.778	28.270	109.253
OTRAS	133.491	20.391	48.196	202.078
TOTAL	645.744	292.872	455.004	1.393.620

FINANCIACION

GRUPO	DEL ESTADO	DEL PROPIO GRUPO	DE OTRAS FUENTES	TOTAL
INI	126.665	157.846	573.151	857.662
INH	--	5.500	219.127	224.627
DGPE	57.691	--	51.562	109.253
OTRAS	87.617	--	114.461	202.078
TOTAL	271.973	163.346	958.301	1.393.620

El presente estudio se ha adecuado a lo establecido en el artículo 87,1 apartados a) y b) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, para la regulación y desarrollo de los programas de esta naturaleza. También se han tomado en consideración las normas dictadas para la elaboración de los PAIF del año 1990, contenidas en la Orden Ministerial de Economía y Hacienda de 13 de febrero de 1989.

Los PAIF de las Sociedades Estatales que han sido aprobados, lo fueron por Acuerdos del Consejo de Ministros, de fecha 23 de febrero de 1990 los correspondientes al Instituto Nacional de Industria y al Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Los PAIF de las sociedades dependientes de la Dirección General del Patrimonio y los de otras sociedades fueron aprobados por delegación del Consejo de Ministros, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con fecha 22 de febrero de 1990. El 30 de noviembre de 1990 Acuerdos del Consejo de Ministros aprobaron modificaciones de los PAIF para 1990 del Puerto Autónomo de Valencia, y de las Sociedades Estatales de Mercados en Origen, S.A. (MERCOSA), Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENAUSA) y Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (MAYASA).

En el Informe Anual correspondiente al Ejercicio de 1984, se analizaban por primera vez, los Programas de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), análisis que se ha mantenido en los Informes Anuales sucesivos y ha permitido verificar la existencia de grandes desviaciones entre lo planificado en el PAIF y la realidad de las Sociedades Estatales. La reiteración de estas desviaciones obliga a tratar de extraer algunas conclusiones que permitan explicar las causas que permitan explicar dichas desviaciones (las correspondientes a este ejercicio de 1990 se exponen en el apartado IV.1.4).

Se ha podido comprobar en las distintas visitas practicadas a las diferentes Sociedades Estatales que prácticamente ninguna de ellas calcula las desviaciones originadas a efectos de mejorar la gestión, sino únicamente para dar las explicaciones solicitadas por este Tribunal, transcurrido un dilatado período de tiempo. En un mundo tan dinámico como el de la gestión empresarial, el verse obligado a elaborar un plan para el ejercicio siguiente con tanta antelación como se exige para la elaboración de los PAIF[5], conlleva el convencimiento de que se pueden producir grandes desviaciones. Los organismos responsables de las Sociedades no controlan las desviaciones del PAIF ante la poca adecuación de este instrumento para el control de la gestión. Los más experimentados como son el INI y el INH han creado unos instrumentos mucho mas precisos, ya que, con independencia de elaborar el PAIF en sus plazos legales, cada sociedad integrante del grupo confeccionan a final de año otros documentos, el "Plan Operativo Anual" (POA) en el INI y el "Presupuesto Anual" en el INH que son sobre los que realmente se ejerce el control mediante el seguimiento mensual de las previsiones establecidas en estos últimos documentos.

Otra posible causa generadora de diferencias es el reiterado incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley General Presupuestaria[6] acerca de la obligatoriedad de publicación de los PAIF. Por otra parte, la poca efectividad de este documento de previsión como instrumento de control queda claramente puesta de manifiesto por el hecho de que se aprueban modificaciones del PAIF a finales del ejercicio a que hace referencia.

Por último, se ha de advertir que este instrumento, aun con los defectos manifestados, ni siquiera es elaborado por una gran parte de las Sociedades obligadas a ello por el artículo 87 de la Ley General Presupuestaria, que determina la obligatoriedad para todas las Sociedades Estatales de elaborar su correspondiente PAIF. Excluyendo las Sociedades integrantes del grupo INI que están autorizadas a elaborar y aprobar un PAIF conjunto para el grupo, en el Ejercicio de 1990 se ha aprobado el PAIF de 3 Sociedades del INH, 39 de la DGPE y 13 de OTRAS. Proporción que aproximadamente se ha mantenido a lo largo de los ejercicios analizados, sin que le conste a este Tribunal que a pesar de las reiteradas denuncias formuladas en este sentido en los sucesivos Informes Anuales, se haya requerido por ninguna autoridad la elaboración y aprobación de estos PAIF.[7]

IV.1.4.- ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS PAIF

En el cuadro que figura a continuación se exponen, de forma resumida, las inversiones totales realizadas por los distintos grupos de sociedades estatales como desarrollo y ejecución de los programas anuales correspondientes a las mismas, y los distintos

5 Hasta el ejercicio 1990, tenía que elaborarse antes del primero de junio pero la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, modifica el plazo adelantándolo al 15 de marzo.

6 La Ley 31/1990 deroga la obligatoriedad de publicación de los PAIF en el Boletín Oficial del Estado, sin sustituir este canal por otro que garantice el inmediato conocimiento por las Sociedades de las cifras aprobadas por el Gobierno.

7 Se ha requerido por la Secretaría General de Planificación y Presupuestos el envío del PAIF a las sociedades que en definitiva han realizado el documento, pero no a todas aquellas que deberían haberlo hecho.

orígenes de fondos que han permitido la financiación efectiva de dichas inversiones.

(En millones de pesetas)

INVERSIONES

GRUPO	EN INMOVILIZADO MATERIAL	FINANCIERAS	OTRAS	TOTAL
INI	264.035	184.038	477.826	925.899
INH	148.081	68.142	(10.699)	205.524
DGPE	60.114	29.060	54.145	143.319
OTRAS	183.288	22.520	53.070	258.878
TOTAL	655.518	303.760	574.342	1.533.620

FINANCIACION

GRUPO	DEL ESTADO	DEL PROPIO GRUPO	DE OTRAS FUENTES	TOTAL
INI	136.397	147.032	642.470	925.899
INH	1.282	3.378	200.864	205.524
DGPE	69.035	--	74.284	143.319
OTRAS	107.337	--	151.541	258.878
TOTAL	314.051	150.410	1.069.159	1.533.620

IV.1.4.1.- Instituto Nacional de Industria

El Grupo del Instituto Nacional de Industria había previsto en sus programas de actuación para el ejercicio de 1990 un volumen de actividad económico-financiera cifrado en 857.662 millones de pesetas, aún cuando se aprobó esta cifra global, los documentos preparatorios la desglosan en las divisiones a las que se hace referencia a lo largo de este Informe Anual.

Los resultados efectivos de la ejecución de dichos programas durante el ejercicio que se considera, han elevado el volumen de fondos empleados a 925.899 millones de pesetas, cifra que excede en un 8% a la previsión inicial.

A continuación se expone, de forma más pormenorizada, el grado de cumplimiento de los distintos programas de inversiones y de su correspondiente financiación por parte del Instituto.

IV.1.4.1.1.- Inversiones

Las inversiones totales realizadas durante el ejercicio de 1990, por el Instituto Nacional de Industria fueron superiores a las previstas para el mismo período en 68.237 millones de pesetas, lo que representa una desviación del 8% sobre la programación estimada inicialmente.

En el cuadro siguiente se recogen los datos relativos a los distintos grados de cumplimiento de los diferentes componentes del programa de inversiones del Instituto.

(En millones de pesetas)

	PAIF	REAL	DIFERENCIAS EN VALOR ABSOLUTO	DIFERENCIAS EN %
INMOVILIZADO MATERIAL	290.340	264.035	(26.305)	(9)
INMOVILIZADO INMATERIAL	9.124	11.461	2.337	26
GASTOS AMORTIZABLES	23.360	5.439	(17.921)	(77)
INVERSIONES FINANCIERAS	226.456	184.038	(42.418)	(19)
REEMBOLSO DE EMPRESTITOS, BONOS Y PRESTAMOS	299.326	460.926	161.600	54
PREVISION AUMENTO D.L. 20/70	7.440	--	(7.440)	--
INVERSION A DECIDIR POR EL GOBIERNO	1.616	--	(1.616)	--
TOTAL	857.662	925.899	68.237	8

La inversión en los conceptos de reembolso de empréstitos, bonos y préstamos y de inmovilizado inmaterial son las dos rúbricas que han alcanzado una cifra anual de ejecución superior a la prevista, registrando unas desviaciones del 54 y del 26 por ciento respectivamente, sobre el valor programado inicialmente. Para las restantes modalidades de inversión se han alcanzado unas cifras finales de ejecución inferiores a las previstas.

En la rúbrica denominada previsión para aumentos en las inversiones, cuyo régimen está regulado por el Decreto-Ley 20/1970, no figura, como puede observarse en el cuadro anterior, ningún importe aplicado en el concepto relativo a la ejecución real de inversiones. La finalidad de la introducción de esta partida en la programación anual del Instituto ha sido la de posibilitar el aumento de la cuantía de las diversas inversiones a realizar durante el ejercicio, hasta en un 5% de su valor programado inicialmente. Por ello, las cantidades aplicadas a los diversos proyectos de inversión figuran formando parte del importe de los mismos en los apartados correspondientes a la ejecución real de los de su misma naturaleza. En el ejercicio de 1990 se han autorizado incrementos en la dotación de inversiones, en base a este concepto, por un importe de 7.248 millones de pesetas. Las Divisiones en las que se ha aplicado la mayor parte de estos fondos han sido la de Defensa y Electrónica, por un importe de 3.500 millones de pesetas, Siderurgia y Minería por 2.485 millones y en la de Empresas Diversas, por valor de 1.000 millones de pesetas.

De la rúbrica dedicada a inversión a decidir por el Gobierno se ha aplicado solamente la cantidad de 75 millones de pesetas a la División de Empresas Diversas y también su destino está contenido y registrado en el importe acumulado de las diferentes inversiones realizadas.

A continuación se analizan las rúbricas en las que se han registrado las desviaciones más significativas:

Inmovilizado Material

La inversión realizada en esta modalidad de activos fue, con carácter general, inferior a la prevista en el PAIF por un importe total de 26.305 millones de pesetas, que se corresponde con el 9% de la cifra de las previsiones calculadas por este concepto.

La diferencia citada es el resultado neto de la agregación de las desviaciones de diferente signo registradas por varias Divisiones del Instituto.

La desviación de más importe contenida en la partida citada fue, en términos cuantitativos, la que presenta la División de Automoción y Transporte, con un valor cifrado en 15.787 millones de pesetas de signo negativo. Dicha desviación se localiza básicamente en el sector de transporte aéreo y particularmente en IBERIA por la demora en la construcción de la flota A-320. A su vez se han registrado diferencias dentro de la División, por haber considerado en PAIF todas las inversiones como materiales, sin presupuestar ninguna cantidad como inversión inmaterial.

Otra desviación significativa pero de signo positivo se registra en la División de Aluminio y Químicas, por un importe de 8.170 millones de pesetas, se localiza principalmente en las sociedades siguientes: a) El Grupo INESPAL, por un importe de 4.310 millones de pesetas, debido a la realización de mayores inversiones en el proyecto "Delfín" destinado a una mayor realización, dimensionamiento industrial y posicionamiento comercial en la actividad de transformación. También se han registrado diferencias positivas por la distinta agrupación entre PAIF y real, ya que en el PAIF no se incluyen dentro del Grupo INESPAL diversas empresas sí recogidas en el grado de cumplimiento. b) Empresa Nacional de Celulosas, S.A. (ENCE) en la que las inversiones realizadas fueron superiores a las previstas en 2.000 millones de pesetas aproximadamente con el fin de hacer más competitivas sus factorías, destacando como proyectos más relevantes el de "Preblanqueo con oxígeno", de "Caldera de Recuperación III" y el de "Reposición y Modernización de Línea de Pasta", y c) En la sociedad SURIA K donde las inversiones realizadas han sido superiores a las previstas en 1.200 millones de pesetas destacando el adelanto en las inversiones de los proyectos de "Investigación de concesiones mineras", "Ampliación a 290 KT" y la adquisición de un nuevo minador.

Inmovilizado Inmaterial

Se registró en este concepto una desviación positiva por importe de 2.337 millones de pesetas, equivalente al 26% de la previsión inicial de la misma.

La desviación registrada está básicamente localizada en las Divisiones de Defensa y Electrónica y la de Automoción y Transporte. En Defensa y Electrónica por importe de 1.939 millones de pesetas debido a que la previsión ha sido inferior a las realizaciones efectivas. En Automoción y Transporte la diferencia surgida por 1.146 millones de pesetas se debe a que en PAIF se previeron todas las inversiones como materiales y ninguna como inmaterial (como se indicó en la rúbrica de inversiones en Inmovilizado Material).

Gastos amortizables

La desviación total negativa en esta rúbrica alcanza la cifra de 17.921 millones de pesetas y es el resultado de la agregación de las desviaciones experimentadas en varias Divisiones, siendo la más importante la desviación negativa registrada en la División de Construcción Naval por 10.350 millones de pesetas que corresponde principalmente a "Astilleros Españoles, S.A." (AESA) por la contabilización anticipada en el ejercicio de 1989 del coste estimado de los planes de reconversión industrial para el período entre 1989 y 1994.

Inversiones financieras

En este apartado de la inversión del Grupo se alcanzó una cifra de ejecución real, inferior a la prevista en 42.418 millones de pesetas, lo que representa un 19% sobre la previsión inicial.

La diferencia más significativa de las que han determinado la desviación total se ha localizado en la División de Automoción y Transporte, por un importe de 33.706 millones de pesetas de signo negativo. ENASA es la sociedad que ha registrado la mayor parte de este diferencia, evaluada en 30.000 millones de pesetas, debido a que esta entidad no realizó el intercambio de acciones ENASA-MAN prevista inicialmente en PAIF.

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

En este concepto de la inversión es en el que se ha registrado la desviación más elevada del Grupo, en términos absolutos. Su signo es positivo y alcanza la cifra de 161.600 millones de pesetas, equivalentes al 54% de la previsión del PAIF.

La desviación más significativa registrada en esta rúbrica, en términos cuantitativos, fue la generada en la División de Energía Eléctrica, por importe de 58.429 millones de pesetas, como consecuencia del incremento de los recursos ajenos, aplicados a esta finalidad para mejorar las condiciones de los créditos, de aproximadamente 46.000 millones de pesetas y por las menores inversiones en el inmovilizado del sector localizadas principalmente en ENDESA por 9.578 millones de pesetas que permitieron reembolsar préstamos por encima de lo previsto en el PAIF.

Otras desviaciones positivas destacables se produjeron en las Divisiones de Siderurgia y Minería por 12.840 millones de pesetas,

de Construcción Naval por 47.902 millones de pesetas, de Aluminio y Químicas por 13.578 millones de pesetas, de Defensa y Electrónica por 22.478 millones de pesetas y en la de Bienes de Equipo y Construcción por un importe de 20.028 millones de pesetas.

La División de Automoción y Transporte registró la variación negativa más importante, evaluada en 7.846 millones de pesetas, originada principalmente por la influencia de los peores resultados obtenidos por el sector en el ejercicio, lo que ha motivado que no se reembolsaran los importes previstos inicialmente en PAIF.

IV.1.4.1.2.- Financiación

La financiación total prevista por el Instituto Nacional de Industria fue de 857.662 millones de pesetas. Los fondos obtenidos se elevaron a 925.899 millones de pesetas, lo que en términos porcentuales representa un 8 por 100.

A continuación se presenta el cuadro en el que se han desglosado las diferentes fuentes de los fondos utilizados en la ejecución del PAIF anual, así como el grado de cumplimiento de las previsiones contenidas en el citado programa.

(En millones de pesetas)

	PAIF	REAL	DIFERENCIAS EN VALOR ABSOLUTO	DIFERENCIAS EN %
APORTACIONES DEL ESTADO	126.665	136.397	9.732	8
APORTACION INI	157.846	147.032	(10.814)	(7)
GENERACION INTERNA DE FONDOS	191.151	224.158	33.007	17
RECURSOS AJENOS	286.581	341.353	54.772	19
DESINVERSIONES	87.159	76.776	(10.383)	(12)
APORTACION ACCIONISTAS PRIVADOS	8.280	203	(8.077)	(97)
TOTAL	857.662	925.899	68.237	8

La diferencia positiva que presenta una mayor entidad cuantitativa, en términos absolutos, ha sido la registrada por la actividad de obtención de recursos de instituciones financieras ajenas al Grupo, que alcanzó la cifra de 54.772 millones de pesetas, y también la de mayor entidad, pero de signo negativo, fue la de aportaciones del propio Grupo a sus empresas filiales, que se elevó a 10.814 millones de pesetas.

En los apartados que figuran a continuación se desarrollan con mayor detalle los resultados deducidos de la ejecución de las distintas modalidades de financiación y la composición de las desviaciones más significativas.

Aportaciones del Estado, CC.AA., SS.EE., etc.

La financiación aportada por el Estado al Grupo INI fue de 136.397 millones de pesetas, de los cuales 125.500 millones han sido aportación directa al propio INI y 10.897 millones al Grupo de Sociedades adscritas al Instituto. La aportación prevista en PAIF fue de 126.665 millones de pesetas, siendo por tanto la aportación efectiva superior en 9.732 millones de pesetas a la programada.

La desviación positiva registrada en la División de Energía Eléctrica por 4.021 millones de pesetas, es la más significativa y se generó en la E.N. de Electricidad, S.A. (ENDESA) como consecuencia de las subvenciones recibidas para proyectos de I+D (principalmente para el proyecto ESCATRON de combustión limpia), y que en PAIF habían sido previstas en la rúbrica "Aportación accionistas privados".

El Instituto ha recibido como aportación del Estado, la totalidad del importe que había sido previsto inicialmente en PAIF.

Aportación INI

La financiación facilitada por el Grupo a sus propias Divisiones productivas fue inferior a la prevista en PAIF en un 7%, desviación que en términos absolutos se elevó a 10.814 millones de pesetas.

Las diferencias registradas tienen entre otras, las siguientes causas:

Las aportaciones efectuadas, utilizando la posibilidad de aumento de financiación hasta un 5% sobre el programa anual de actuación e inversiones de las Empresas y actividades en las que el Instituto participa, previsto en el Decreto-Ley 20/1970. En efecto, debidamente autorizados, se aplicaron, como se ha indicado anteriormente, 7.248 millones de pesetas en las Divisiones de Siderurgia y Minería (2.485 millones), Defensa y Electrónica (3.500 millones), Empresas Diversas (1.000 millones) y Energía Eléctrica (263 millones). La previsión anual establecida por este concepto en el PAIF era de 7.440 millones de pesetas.

Las aportaciones efectuadas con cargo a las Reservas para Inversiones a decidir por el Gobierno. La aportación real, solo fue de 75 millones a la División de Empresas Diversas, frente al importe previsto en PAIF que era de 1.616 millones de pesetas.

Las variaciones experimentadas por las diferentes Divisiones en la financiación aportada por su Entidad matriz fueron autorizadas por Acuerdo del Consejo de Administración del INI de fecha 30 de noviembre de 1990, por el que se determina una redistribución de los medios de financiación disponibles entre algunas Divisiones del Instituto, como consecuencia de variaciones en las necesidades financieras, sin que afecte a la cifra total de los fondos aplicados.

Las Divisiones que han recibido del Instituto una menor aportación a la prevista inicialmente en PAIF han sido las de Automoción y Transporte, Construcción Naval y Bienes de Equipo y Construcción.

Generación interna de fondos

Esta rúbrica recoge tanto la autogeneración de recursos propios como la variación de activos y pasivos circulantes. Esta última es una magnitud cuyos componentes tienen un comportamiento derivado cuya evolución queda, en gran medida, a resultas de las actividades en inversiones de inmovilizado, en la financiación a largo plazo obtenida de terceros y en la financiación propia.

La desviación total positiva en este concepto alcanza la cifra de 33.007 millones de pesetas, que representa en términos porcentuales un 17% de la previsión inicial, y es el resultado de la agregación de las desviaciones de distinto signo experimentadas en las Divisiones, siendo de resaltar como positivas las producidas en la División de Siderurgia y Minería por 21.258 millones de pesetas, en la de Bienes de Equipo y Construcción por 22.418 millones de pesetas y en el INI, por 32.126 millones de pesetas correspondiente a devoluciones de préstamos de sus empresas filiales que no habían sido previstas inicialmente en PAIF, y como negativas las de la División de Automoción y Transporte y la de Defensa y Electrónica por 53.056 y 30.939 millones de pesetas, respectivamente.

Recursos ajenos

Los fondos obtenidos por mediación de entidades e instituciones financieras ajenas al Grupo han sido superiores en un 19% a los previstos en la estimación inicial. La desviación experimentada por esta rúbrica alcanzó, en términos absolutos, la cifra de 54.772 millones de pesetas.

La desviación positiva más importante contenida en la partida citada es, en términos cuantitativos, la que presenta la División de Defensa y Electrónica, con un valor cifrado en 52.529 millones de pesetas.

Otras desviaciones significativas positivas se produjeron en la División de Energía Eléctrica, por 46.267 millones de pesetas, y en la División de Aluminio y Químicas por importe de 14.681 millones de pesetas.

Las desviaciones negativas más importantes fueron las de la División de Siderurgia y Minería por 22.492 millones de pesetas, la División de Empresas Diversas por 7.971 millones de pesetas, y el INI por 35.393 millones de pesetas.

Desinversiones

La diferencia negativa registrada entre los valores que se han realizado efectivamente y los previstos en PAIF fue de 10.383 millones de pesetas.

El componente más significativo de esta desviación se sitúa en el INI con una desviación negativa total de 13.543 millones de pesetas a causa de la demora en la venta prevista en PAIF de la participación en el capital de su filial la "E.N. de Autocamiones", S.A. (ENASA) hasta el ejercicio siguiente.

En la División de Energía Eléctrica se produjo la desviación positiva de mayor importe por 5.068 millones de pesetas que corresponde prácticamente en su totalidad a la Empresa Nacional del Uranio, S.A. (ENUSA).

Aportación de Accionistas Privados

La desviación negativa registrada en esta rúbrica se eleva al 97% de la previsión inicial, en términos relativos, y a 8.077 millones de pesetas en términos absolutos.

En la División de Defensa y Electrónica, se produjo una desviación por importe de 2.485 millones de pesetas, motivada por la ampliación de capital prevista en PAIF para la sociedad "Construcciones Aeronáuticas, S.A." (CASA), en la que no suscribieron los accionistas privados la parte correspondiente, suscribiendo el INI la totalidad de la misma. Otra desviación negativa con respecto al PAIF se registró en la División de Energía Eléctrica por importe de 2.843 millones de pesetas.

IV.1.4.2.- Instituto Nacional de Hidrocarburos

IV.1.4.2.1.- Inversiones

Las inversiones reales efectuadas por esta Entidad han experimentado una desviación negativa evaluada en 19.103 millones de pesetas, en términos absolutos, y equivalente al 8'5% de la inversión anual programada.

En el cuadro que figura a continuación se recogen las distintas rúbricas en las que se ha materializado la inversión, así como los diferentes grados de cumplimiento de los programas previstos para cada una de ellas.

(En millones de pesetas)

	PAIF	REAL	DIFERENCIAS EN VALOR ABSOLUTO	DIFERENCIAS EN %
INMOVILIZADO MATERIAL	162.708	148.081	(14.627)	(9)
INMOVILIZADO INMATERIAL	444	2.396	1.952	440
INVERSIONES FINANCIERAS	24.247	68.142	43.895	181
REEMBOLSO DE EMPRESTITOS, BONOS Y PRESTAMOS	29.149	33.528	4.379	15
VARIACION DE ACTIVOS Y PASIVOS CIRCULANTES	8.079	(46.623)	(54.702)	(677)
TOTAL	224.627	205.524	(19.103)	(8,5)

A continuación se desarrollan las particularidades más destacables de las diversas variables empresariales consideradas.

Inmovilizado material

La desviación total registrada en este concepto ha sido de 14.627 millones de pesetas, de signo negativo, equivalente a un 9% de la prevista en PAIF.

El Grupo Repsol registra una desviación negativa por 11.794 millones de pesetas. La diferencia citada es el resultado de la agregación de las desviaciones de diferente signo registradas por varias áreas de dicho Grupo.

En el área de exploración se ha producido una desviación negativa respecto a lo previsto en PAIF de 33.500 millones de pesetas a causa de la menor actividad en la ejecución de las inversiones previstas.

El área de química también ha registrado una desviación negativa respecto a la inversión prevista en PAIF por importe de 10.100 millones de pesetas.

Ambas desviaciones han sido parcialmente compensadas con mayores inversiones en el área de refino y marketing que registra una desviación positiva de 30.000 millones de pesetas.

ENAGAS ha registrado una menor actividad que la prevista inicialmente a causa del diferimiento en la ejecución de inversiones en los proyectos de construcción del gaseoducto Sevilla-Madrid por importe de 2.200 millones de pesetas y en el gaseoducto de conexión con Francia por 800 millones de pesetas.

Inmovilizado inmaterial

Esta rúbrica registra una desviación positiva de 1.952 millones de pesetas. La desviación registrada se origina en su totalidad en el INH, principalmente por el aumento de las diferencias de cambio capitalizadas derivadas de los pagarés aceptados a la sociedad argelina SONATRACH.

Inversiones financieras

Las inversiones realizadas en esta modalidad de activos fueron superiores a las previstas inicialmente en PAIF en 43.895 millones de pesetas. Las diferencias parciales que la constituyen, han sido, entre otras, la desviación positiva que se registra en el Grupo Repsol por importe de 16.364 millones de pesetas, y en el Instituto por 27.171 millones de pesetas.

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

Las inversiones realizadas por el Grupo, durante el ejercicio de 1990, en estos conceptos superaron en un 15 por ciento, 4.379 millones de pesetas en cifras absolutas, a los valores previstos en PAIF.

El Grupo Repsol superó sus previsiones de reembolso de pasivos financieros a largo plazo en 18.534 millones de pesetas. Las diferencias negativas se produjeron en ENAGAS por 2.615 millones de pesetas y en el INH por importe de 11.540 millones de pesetas.

Variación de activos y pasivos circulantes

La variación experimentada por estas rúbricas fue inferior a la prevista en PAIF del ejercicio en 54.702 millones de pesetas, cifra resultante de la adición de las desviaciones de signo negativo producidas en el Grupo Repsol por importe de 30.237 millones de pesetas, y en el INH por 29.474 millones de pesetas, y la de signo positivo registrada en ENAGAS por 5.009 millones de pesetas.

IV.1.4.2.2.- Financiación

Los fondos totales obtenidos por este Grupo de sociedades, durante el ejercicio de 1990, fueron inferiores a los establecidos en la previsión figurada en el PAIF correspondiente en 19.103 millones de pesetas, como consta con mayor detalle, en el cuadro que figura a continuación.

(En millones de pesetas)

	PAIF	REAL	DIFERENCIAS EN VALOR ABSOLUTO	DIFERENCIAS EN %
APORTACIONES DE OO.AA.SS.EE. ETC.	--	1.282	1.282	-
APORTACION INH	5.500	3.378	(2.122)	(39)
RECURSOS PROPIOS	155.047	126.157	(28.890)	(19)
RECURSOS AJENOS	52.100	50.828	(1.272)	(2)
ENAJENACION INMOV. MATERIAL E INMATERIAL	70	6.029	5.959	8.513
ENAJENACION INMOVILIZADO FINANCIERO	11.910	17.850	5.940	50
TOTAL	224.627	205.524	(19.103)	(8,5)

Consideradas en sus valores absolutos, las mayores desviaciones fueron las registradas en las rúbricas de enajenación de inmovilizado material e inmaterial, con signo positivo, y en la obtención de recursos propios, con signo negativo.

En los apartados siguientes figuran los distintos conceptos en los que se ha materializado la financiación de las inversiones del Grupo y las desviaciones experimentadas por los mismos.

Aportaciones de OO.AA., Sociedades Estatales, etc.

La desviación experimentada por esta rúbrica se registra en el Grupo Repsol, debido a que en PAIF no se había previsto recibir aportaciones por subvenciones de organismos oficiales. Estas aportaciones fueron concedidas por diversas Comunidades Autónomas y OCIPETROL para realizar actividades en las áreas de química y de refino y marketing.

Aportaciones del Grupo

La aparente desviación negativa registrada en este concepto se ha generado en ENAGAS, a causa de que aunque la aportación realizada por el INH fue de 5.500 millones de pesetas, importe que estaba previsto en PAIF, de dicho importe 2.122 millones se imputaron a resultados del ejercicio de 1990, siendo el aumento neto de la subvención en capital de ENAGAS sólo 3.378 millones de pesetas.

Recursos propios

La autogeneración de recursos propios fue inferior a la prevista en 28.890 millones de pesetas. La desviación registrada es el resultado del sumatorio de diversos componentes parciales, de distinto signo.

El Grupo Repsol y el INH han registrado diferencias negativas por importes de 24.690 y 10.121 millones de pesetas, respectivamente, y ENAGAS presenta un excedente de 5.921 millones de pesetas.

Recursos ajenos

El Grupo ha demandado durante el ejercicio un volumen de fondos a entidades e instituciones financieros, inferior en 1.272 millones de pesetas a la cifra prevista inicialmente en PAIF.

Enajenación de inmovilizado material e inmaterial

Se ha registrado por este concepto un ingreso de fondos superior al previsto en el PAIF por un importe de 5.959 millones de pesetas que es atribuible, en su mayor parte, al Grupo Repsol.

Enajenación de inmovilizado financiero

Esta rúbrica ha experimentado una desviación, de signo positivo, de un valor 5.940 millones de pesetas, equivalente al 50% de la previsión inicial del PAIF, siendo las más significativas la desviación positiva, por importe de 7.588 millones de pesetas, registrada en el Grupo Repsol, y la desviación negativa en el INH cifrada en 1.723 millones de pesetas.

IV.1.4.3.- Dirección General del Patrimonio del Estado

Los PAIF para el ejercicio de 1990 correspondientes a las sociedades no financieras dependientes de la Dirección General del Patrimonio del Estado, en las que existía una participación mayoritaria directa del Estado, más las sociedades "Autopista Concesionaria Astur-leonesa, S.A." (AUCALSA) y "Autopistas del Atlántico, S.A." (AUDASA), cuyo capital pertenecía totalmente al Estado de forma indirecta, a través de la "Empresa Nacional de Autopistas, S.A." (ENAUSA), preveían inversiones por un importe total de 109.253 millones de pesetas, y la realización efectiva de dichas previsiones alcanzó la cifra de 143.319 millones de pesetas.

IV.1.4.3.1.- Inversiones

En el siguiente cuadro se recogen los distintos grados de cumplimiento de los diferentes conceptos de los programas de inversión.

(En millones de pesetas)

	PAIF	REAL	DIFERENCIAS EN VALOR ABSOLUTO	DIFERENCIAS EN %
INMOVILIZADO MATERIAL	59.205	60.114	909	2
INVERSIONES FINANCIERAS	21.778	29.060	7.282	33
REEMBOLSO DE EMPRESTITOS, BONOS Y PRESTAMOS	24.401	51.815	27.414	112
VARIACION DE ACTIVOS Y PASIVOS CIRCULANTES	(14.046)	(13.464)	582	--
OTRAS INVERSIONES	17.915	15.794	(2.121)	(12)
TOTAL	109.253	143.319	34.066	31

La inversión en los conceptos de reembolso de empréstitos, bonos y préstamos y de inmovilizado financiero ha alcanzado una cifra anual de ejecución superior a la prevista, registrando unas desviaciones del 112 y del 33 por ciento respectivamente, sobre el valor programado inicialmente. Las operaciones de refinanciación de pasivos a largo plazo han producido algunas de las desviaciones tanto en el reembolso de aquéllos como en la contratación de nuevas deudas a plazo largo. Para las restantes modalidades de inversión se ha alcanzado una ejecución superior a la prevista excepto en la partida de Otras Inversiones que registró una desviación negativa de 2.121 millones de pesetas.

A continuación se señalan las sociedades en las que se han producido las desviaciones más significativas en cada uno de los conceptos de inversión anteriormente señalados.

Inmovilizado Material

La inversión realizada en esta rúbrica fue superior a la prevista por un importe de 909 millones de pesetas. La diferencia es el resultado neto de las desviaciones de diferente signo registradas por varias sociedades, entre las que destacan:

Las experimentadas en EXPO-92 y MERCASA de signo positivo, por valor de 12.309 y 1.413 millones de pesetas respectivamente, y las ocasionadas en TRANSMEDITERRANEA y MERCOSA de signo negativo por 6.557 y 3.545 millones de pesetas respectivamente.

Inversiones financieras

El exceso de inversiones financieras en relación a las previsiones formuladas en el PAIF se elevó a 7.282 millones de pesetas equivalente al 33% de la previsión inicial.

La desviación mencionada está localizada principalmente en las sociedades TABACALERA, con una desviación positiva de 16.483

millones de pesetas y HOLSA y ENAUSA con una desviación negativa de 6.542 y 2.500 millones de pesetas, respectivamente.

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

Se ha registrado en este concepto una desviación positiva de 27.414 millones de pesetas. Se han producido desviaciones en ambos sentidos, pero por la cuantía de las mismas merecen ser destacadas las positivas originadas en las sociedades AUDASA, AUCALSA y TABACALERA, por importes de 19.828, 7.043 y 1.125 millones de pesetas, respectivamente, y la negativa producida en MERCOSA por 855 millones de pesetas.

Variación de activos y pasivos circulantes

Las desviaciones producidas en la variación del capital circulante de cada una de las sociedades es consecuencia directa del grado de cumplimiento por las mismas de las restantes previsiones tanto de inversión como de financiamiento. Aunque la diferencia global entre los valores previstos y los realizados no es muy significativa (582 millones de pesetas de signo positivo) sí lo son las diferencias parciales registradas en las sociedades a las que el efecto de las compensaciones mutuas resta representatividad.

La desviación más significativa es de signo negativo por importe de 14.829 millones de pesetas localizada en la sociedad EXPO-92. También son relevantes las desviaciones negativas producidas en MERCOSA, MERCASA y AUCALSA, por importes, respectivamente, de 8.280, 3.027 y 1.883 millones de pesetas.

Desviaciones positivas, de cierta entidad, se produjeron en las sociedades TABACALERA, TRASMEDITERRANEA y "Empresa Nacional de Transformación Agraria, S.A." (TRAGSA) por importe de 9.808, 6.167 y 3.474 millones de pesetas, respectivamente.

Otras inversiones

Este apartado recoge una desviación negativa por importe de 2.121 millones de pesetas. Se han incluido en este apartado, las inversiones destinadas a inmovilizado inmaterial (con cifras de previsión y realización de 5.329 y 2.751, respectivamente), la capitalización en gastos amortizables (prevista y realizada por 360 y 1.203 millones de pesetas, respectivamente), y los pagos por impuestos y dividendos imputables al ejercicio anterior.

Las principales desviaciones están localizadas en las sociedades V CENTENARIO, ALDEASA y TABACALERA. En V CENTENARIO[8] la desviación de signo negativo fue de 4.835 millones de pesetas, ALDEASA registró una desviación negativa por importe de 962 millones de pesetas, y TABACALERA recoge por el contrario una desviación de signo positivo por valor de 622 millones de pesetas.

IV.1.4.3.2.- Financiación

Los fondos obtenidos por las sociedades de este Grupo para financiar las inversiones efectuadas en el ejercicio 1990 han excedido en 34.066 millones de pesetas a las previsiones formuladas en los PAIF respectivos, según el siguiente detalle por conceptos.

(En millones de pesetas)

	PAIF	REAL	DIFERENCIAS EN VALOR ABSOLUTO	DIFERENCIAS EN %
APORTACIONES DEL ESTADO	57.691	61.026	3.335	6
APORTACIONES DE OO.AA.,SS.EE.,ETC.	--	8.009	8.009	--
RECURSOS PROPIOS	29.591	15.221	(14.370)	(49)
RECURSOS AJENOS	16.847	41.026	24.179	144
ENAJENACION DE INVERSIONES	5.126	18.037	12.913	252
TOTAL	109.253	143.319	34.066	31

Entre los medios de financiación de las inversiones destacan por el valor absoluto de las desviaciones originadas, respecto a las previsiones, los recursos propios con signo negativo a causa de un peor resultado económico del ejercicio y los recursos ajenos con signo positivo. La menor disponibilidad de fondos por los resultados negativos han hecho necesario solicitar diversos créditos para llevar a cabo la refinanciación de las deudas.

Aportaciones del Estado

El Estado en este Grupo dada su titularidad directa como accionista de las sociedades integrantes del mismo, efectúa aportaciones de capital como socio, y a fondo perdido como subvenciones.

Las principales desviaciones registradas por aportaciones como subvenciones de capital se localizan en las siguientes sociedades:

HOLSA registró una desviación positiva de 7.944 millones de pesetas, EXPO-92 por un importe de 1.117 millones de pesetas que recibió de la "Agencia Española para la Cooperación Internacional". AUDASA y AUCALSA recibieron subvenciones por importes menores a los previstos en PAIF en 1.410 y 912 millones de pesetas, respectivamente.

Las principales desviaciones por aportaciones de capital inferiores a las previstas, afectan a las sociedades AUDASA, AUCALSA, MAYASA y MERCASA.

AUDASA y AUCALSA no realizaron las ampliaciones de capital previstas por importes de 1.500 y 1.000 millones de pesetas. En MAYASA la desviación negativa fue de 1.100 millones de pesetas.

MERCASA al igual que MAYASA, retrasó al siguiente ejercicio la ampliación prevista inicialmente, por importe de 600 millones de pesetas.

Aportaciones de OO. AA., Sociedades Estatales, Etc.

La desviación positiva experimentada por esta rúbrica, 8.009 millones de pesetas se ocasiona en su totalidad en HOLSA. Este importe ha sido recibido del Ayuntamiento de Barcelona y recoge subvenciones correspondientes a este año y a ejercicios anteriores.

Recursos propios

La generación de recursos propios, que a nivel de Grupo ha sido inferior en 14.370 millones de pesetas a lo previsto, es el resultado neto de la agregación de las desviaciones de diferente signo registradas por varias sociedades, entre las que destacan, las desviaciones negativas de MERCOSA, EXPO 92 y HOLSA por 10.144, 3.821 y 18.074 millones de pesetas, respectivamente; y las desviaciones positivas de TABACALERA, TRAGSA y TRASMEDITERRANEA por importes de 15.547, 3.900 y 1.013 millones de pesetas, respectivamente.

Recursos ajenos

Se han producido desviaciones de distinto signo, y destacan entre las que suponen un mayor grado de endeudamiento del previsto las que corresponden a las sociedades AUDASA y AUCALSA, por importes de 21.248 y 8.098 millones de pesetas, respectivamente.

Entre las cifras de endeudamiento inferiores a las previstas destacan las que se produjeron en TRASMEDITERRANEA y ALDEASA como más destacadas, alcanzando las respectivas desviaciones importes de 2.385 y 2.100 millones de pesetas.

Enajenación de inversiones

Se han producido desinversiones superiores a las previstas en 12.913 millones de pesetas. El componente más significativo corresponde a TABACALERA con una desviación positiva de 11.842 millones de pesetas.

IV.1.4.4.- Otras Sociedades

En este apartado se consideran las siguientes Sociedades estatales:

- Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE).
- Sociedad Española de Promoción y Equipamiento del suelo(SEPES).
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).
- Puerto Autónomo de Valencia.
- Puerto Autónomo de Barcelona.
- Puerto Autónomo de Huelva.
- Puerto Autónomo de Bilbao.
- E.N. de Transporte de viajeros por carretera (ENATCAR).
- Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial(CDTI).
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía(IDAE).
- Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A.(ENRESA).
- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.(ISDEFE)

IV.1.4.4.1.- Inversiones

La cifra total de previsión de inversiones para las Sociedades anteriormente relacionadas, en el ejercicio de 1990, ascendió a 202.078 millones de pesetas, y realmente se inviertieron 258.878 millones de pesetas, lo que supone una desviación positiva de 57.211 millones de pesetas, en cifras absolutas, y del 28% en cifras relativas.

A continuación se detalla el grado de cumplimiento que en el conjunto de las sociedades mencionadas han tenido las distintas partidas de inversiones previstas en PAIF.

(En millones de pesetas)

	PAIF	REAL	DIFERENCIAS EN VALOR ABSOLUTO	DIFERENCIAS EN %
INMOVILIZADO MATERIAL	133.491	182.288	48.797	37
INMOVILIZADO INMATERIAL	120	368	248	206
GASTOS AMORTIZABLES	273	1.734	1.461	535
INVERSIONES FINANCIERAS	20.831	22.970	2.139	10
REEMBOLSO DE EMPREST., BONOS Y PRÉSTAMOS	33.838	36.004	2.166	6
VARIAC. DE ACTIVOS Y PASIVOS CIRCULANTES	13.865	12.161	(1.804)	(13)
OTRAS	-	2.803	2.803	-
TOTAL	202.078	258.878	56.800	28

Las cifras de ejecución han sido superiores a las previstas, en el conjunto de las sociedades consideradas, para las distintas partidas de inversiones, excepto para la variación de activos y pasivos circulantes.

No obstante, como las cifras globales pueden desfigurar las desviaciones efectivamente producidas en cada una de las sociedades, a continuación se analizan las principales diferencias entre las cifras reales y las previstas, en cada uno de los conceptos de inversión anteriormente citados.

Inmovilizado Material

Se han producido desviaciones por mayor y por menor inversión que la programada inicialmente en PAIF, destacando entre las primeras la originada en RENFE por 53.816 millones de pesetas. Esta

[8] Las cuentas de esta Sociedad fueron rendidas con posterioridad al cierre de los trabajos para la elaboración del presente Informe Anual, pero se ha contado con otra documentación para el presente análisis.

desviación se produce básicamente porque el importe que figura en PAIF correspondía exclusivamente al previsto en el contrato programa Estado-Renfe sin tener en cuenta la aprobación por parte del Consejo de Ministros de las inversiones a realizar en el proyecto de alta velocidad, así como en el Plan de Transportes de Cercanías.

El Puerto Autónomo de Valencia ha registrado una desviación positiva cifrada en 2.156 millones de pesetas; menores inversiones que las previstas se han producido en varias sociedades entre las que destacan la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT) que ha registrado una desviación negativa de 1.884 millones de pesetas, y los Puertos Autónomos de Bilbao y Huelva que, respectivamente, se desviaron por importes de 1.239 y 1.022 millones de pesetas.

Inmovilizado Inmaterial

En el conjunto de las entidades cuyos PAIF son objeto de análisis en esta rúbrica, la desviación positiva originada por importe de 248 millones de pesetas corresponde en su mayoría (202 millones de pesetas) a FEVE, por los gastos de investigaciones y estudios realizados en las inversiones de varios proyectos, hecho que en PAIF fue contemplado como inversión en inmovilizado material.

Gastos Amortizables

En esta rúbrica las principales desviaciones, en cifras absolutas corresponden a las sociedades Puerto Autónomo de Barcelona y FEVE por importes de 984 y 373 millones de pesetas, respectivamente.

Inversiones Financieras

La desviación global positiva de 2.129 millones de pesetas que se registra en este concepto, es producida por desviaciones en ambos sentidos.

Por su importancia relativa destacan las cifras de desviaciones positivas originadas en las sociedades ENRESA y FEVE, por importes de 1.914 y 934 millones de pesetas, respectivamente. Se ha invertido menos de lo previsto en el CDTI y en el IDAE por importes de 547 y 216 millones de pesetas, respectivamente.

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

La principal desviación en valores absolutos corresponde a la sociedad de ENATCAR,[9] con un desembolso de 3.376 millones de pesetas más de los previstos. También son significativas las desviaciones negativas que experimentaron FEVE y RENFE de 910 y 712 millones de pesetas, respectivamente.

Variación de activos y pasivos circulantes

La variación del capital circulante o fondo de maniobra, ha sido negativa por 1.804 millones de pesetas, consecuencia de desviaciones en ambos sentidos respecto a las previsiones.

Por su importancia cuantitativa destaca la reducción del mencionado fondo de maniobra en RENFE, por importe de 24.913 millones de pesetas. Entre las desviaciones positivas destacan FEVE, ENRESA e IDAE, por importes de 18.293, 1.327 y 616 millones de pesetas, respectivamente.

Otras aplicaciones

En este epígrafe se recoge la diferencia surgida en 2.803 millones de pesetas por cambio de criterio en la sociedad estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo, S.A. (SEPES) por la aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad sobre la imputación de los beneficios en operaciones de venta con pago aplazado en función del ejercicio en el que tenga lugar la venta con independencia del cobro, así como de los ingresos financieros derivados del aplazamiento aplicando el principio del devengo. Anteriormente se diferían los beneficios con pago aplazado hasta los ejercicios en que se producían los cobros y estos incluían el margen en ventas y los intereses por aplazamiento establecidos.

IV.1.4.4.2.- Financiación

La previsión total de financiación a obtener en el ejercicio de 1990, por las sociedades estatales incluidas en este epígrafe conforme al detalle anteriormente expuesto al tratar las inversiones, ascendió a 202.078 millones de pesetas. Los fondos obtenidos se elevaron a 258.878, lo que en términos porcentuales representa un aumento del 28 por 100, según el siguiente detalle por conceptos.

(En millones de pesetas)

			DIFERENCIAS	
	PAIF	REAL	EN VALOR ABSOLUTO	EN %
APORTACIONES DEL ESTADO	88.687	93.381	4.694	5
APORTACIONES DE OO AA SS EE ETC	930	15.958	15.028	1.616
RECURSOS PROPIOS	71.058	94.055	22.797	32
RECURSOS AJENOS	36.873	51.602	14.729	40
ENAJENACIÓN DE INV. REEMBOLSO DE PREST	5.730	5.284	(446)	(8)
TOTAL	202.078	258.878	56.800	28

La desviación positiva de mayor entidad cuantitativa absoluta fue la registrada por la partida de recursos propios por importe de 22.797 millones de pesetas, seguida por la aportación de financiación de organismos y la obtención de recursos procedentes de instituciones financieras.

Aportaciones del Estado

La desviación producida en esta rúbrica, según el cuadro anterior, corresponde principalmente a las sociedades ENATCAR,[10] FEVE y Puerto Autónomo de Valencia por importes de 2.982, 1.600 y 108 millones de pesetas, respectivamente.

Aportaciones de OO.AA, Sociedades Estatales, etc.

Las aportaciones de Organismos y Entidades a la financiación de las Sociedades Estatales cuyo PAIF se analiza en este apartado, se vio aumentada en 15.026 millones de pesetas. Destaca una desviación positiva de 15.508 millones de pesetas, que se registró en RENFE y una desviación negativa por 530 millones de pesetas en el Puerto Autónomo de Barcelona.

Recursos propios

La autogeneración de recursos propios se ha producido por los resultados antes de subvenciones obtenidos en el ejercicio, así como por las dotaciones a los fondos de amortización, por la variación en la dotación de provisiones y las subvenciones de explotación recibidas.

Las desviaciones originadas con respecto a las cifras previstas en PAIF de cada sociedad, en general presentan un sentido favorable de mayor financiación (como se ha indicado anteriormente) que la esperada por este concepto, por importe de 22.797 millones de pesetas.

Las más importantes se registraron, todas ellas positivas, en FEVE, SEPES, ENRESA y Puerto Autónomo de Barcelona por importes de 7.559, 2.443, 3.190 y 1.383 millones de pesetas, respectivamente.

Recursos ajenos

En el ejercicio de 1990, las sociedades anteriormente detalladas han recurrido a este medio de financiación por importe superior al previsto en 14.729 millones de pesetas, siendo las desviaciones más importantes las de FEVE y RENFE por importes de 8.008 y 6.614 millones de pesetas, respectivamente.

Enajenación de inversiones y reembolso de préstamos

En este concepto, las desviaciones negativas originadas por falta de cumplimiento de las previsiones se concretan casi exclusivamente en el CDTI, por importe de 2.008 millones de pesetas.

FEVE, Puerto Autónomo de Barcelona y Puerto Autónomo de Valencia realizaron enajenaciones no previstas por 971, 146 y 93 millones de pesetas, respectivamente.

IV.2.- SOCIEDADES ESTATALES FINANCIERAS

En este apartado se contiene el análisis de las cuentas y los resultados de las verificaciones llevadas a cabo, respecto al ejercicio 1990, en relación con las Sociedades Estatales que integran el sector financiero público, incluyéndose en el epígrafe referido al análisis de la Cuenta General del Estado los correspondientes a los Organismos Autónomos del mismo, Caja Postal, Consorcio de Compensación de Seguros y Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

A continuación se exponen los resultados de las Entidades que, por su actividad, se consideran de mayor relevancia en el sector público financiero: Entidades Oficiales de Crédito, Banco Exterior de España, Sociedades Estatales de Seguros, Banco de España, Sociedad Mixta de Segundo Aval y Fondos de Garantía de Depósitos.

IV.2.1.- INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Con relación al ejercicio 1990, han resultado objeto de análisis en la fiscalización llevada a cabo en el Instituto de Crédito Oficial, (I.C.O.), los Contratos de ajuste recíproco de intereses (CARI), el Fondo de financiación exterior de autopistas de peaje, los Préstamos a la Compañía Telefónica Nacional de España e Iberia, el Diferencial de tipos de interés por créditos excepcionales por inundaciones y los Préstamos Gobierno a Gobierno. Asimismo, se ha analizado, por su significación, la deuda acumulada del Tesoro con el ICO y con el resto de las Entidades Oficiales de Crédito al final del ejercicio, en las operaciones en que aquél interviene como agente intermediario, con los resultados que se expresan a continuación:

a) Los CARI constituyen un instrumento financiero de apoyo oficial a la exportación consistente en un seguro de tipo de interés para la entidad bancaria financiadora, a la que se garantiza un rendimiento fijo durante la vida real del préstamo. Esta ayuda se introduce en España mediante la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de medidas financieras de estímulo a la exportación, publicándose

9 Las cuentas de esta Sociedad fueron rendidas con posterioridad al cierre de los trabajos para la elaboración del presente Informe Anual, pero se ha contado con otra documentación para el presente análisis.

10 Las cuentas de esta Sociedad fueron rendidas con posterioridad al cierre de los trabajos para la elaboración del presente Informe Anual, pero se ha contado con otra documentación para el presente análisis.

posteriormente diversas normas reguladoras y se instrumenta mediante un contrato entre el ICO y las entidades financieras prestamistas, liquidándose por períodos semestrales los ajustes de intereses objeto del mismo que se abonan por el Instituto una vez comprobados. El Instituto, trimestralmente, presenta las liquidaciones de gastos por el citado concepto al Ministerio de Economía y Hacienda para que se proceda a su pago.

Del análisis de las liquidaciones por CARI en el ejercicio 1990, desde que en 1988 el I.C.O. se transformó en Sociedad Estatal, así como de la deuda pendiente por este concepto, a 31 de diciembre de 1990, ha resultado que el Tesoro adeuda al ICO, a dicha fecha, 7.126 millones de pesetas, de los cuales, existe constancia en el ICO de que 416 millones corresponden a deuda en fase ADOK pendiente de pago, 5.960 millones de pesetas (diferencia entre el total de créditos presupuestados en los ejercicios 1988, 1989 y 1990 y el importe a que ascienden en los mismos las liquidaciones del CARI), corresponden a gasto para el que no existe dotación presupuestaria, desconociéndose sobre la deuda restante, 750 millones de pesetas, la fase presupuestaria en que se encuentra. Aún cuando se trataba de créditos ampliables, no se ha autorizado ampliación alguna en los tres ejercicios analizados.

Se ha comprobado que en el ejercicio 1989 no se realizó ningún pago por el Tesoro por este concepto, existiendo crédito por importe de 750 millones de pesetas y que en el ejercicio 1990 la dotación presupuestaria se aplicó a gastos generados en el mismo por 687,5 millones de pesetas, destinándose el crédito restante al pago de liquidaciones correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 312,5 millones.

El ICO aplica contablemente las liquidaciones de los CARI correspondientes al último trimestre en el ejercicio siguiente al de su devengo, por confeccionarse las liquidaciones en los primeros meses de cada ejercicio, motivo por el cual, al final de 1990, los gastos reconocidos en la contabilidad del Instituto por dicho concepto no reflejan el importe de 996 millones de pesetas.

Ante la demora en el pago de las liquidaciones formalizadas, pendientes únicamente del reintegro por el Tesoro, el Instituto ha reclamado intereses de demora, no habiendo obtenido, a 31 de diciembre de 1990 resultado alguno.

b) El Fondo de financiación exterior de autopistas de peaje, creado por Ley 44/1983, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, tiene como finalidad la concesión de créditos, en las condiciones que el Gobierno establezca, a las sociedades concesionarias de aquéllas en las que el sector público participe directa o indirectamente de forma mayoritaria, u ostente facultades de decisión. Sólo en la citada Ley y en las de Presupuestos para 1985 y 1986 se concedieron este tipo de préstamos, por un límite máximo de 50.000, 60.000 y 30.000 millones de pesetas, respectivamente.

En las normas de funcionamiento de este Fondo se designa al ICO como administrador y se le autoriza a percibir una comisión, con cargo a las concesionarias, que no exceda del 1 por 1.000 de los importes de los contratos que se generen. La administración del Fondo debe reflejarse en contabilidad separada y en la del ICO las citadas comisiones.

Se ha comprobado que el total de créditos del Fondo dispuestos por las concesionarias asciende a 91.113,5 millones de pesetas, distribuido entre cuatro empresas. A 31 de diciembre de 1990 el principal pendiente ascendía a 28.555 millones, amortizados anticipadamente, en su totalidad, en el ejercicio 1991.

En las verificaciones efectuadas sobre las comisiones percibidas por el ICO por sus servicios de administración, que se han reflejado en la contabilidad del ICO según la normativa aplicable, así como en las practicadas en cuanto al Fondo, no se han detectado incidencias significativas.

c) Los préstamos concedidos por el ICO a Iberia y a la Compañía Telefónica Nacional de España, S.A. (CTNE) pendientes de cancelar a 31 de diciembre de 1990, financiados con fondos provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que opera a través del Instituto para obtener la garantía del Estado, se recogen, en millones de pesetas, a continuación:

	IBERIA	CTNE	TOTAL
Créditos formaliz. antes de 1990	28.000	107.987	135.987
Créditos formalizados en 1990	42.000	52.500	94.500
Total créditos formalizados	70.000	160.487	230.487
Créditos dispuestos	69.992	159.241	229.233

Los créditos formalizados en el año 1990 fueron dispuestos por Iberia y la CTNE en su totalidad.

El ICO por su función de intermediación obtiene una comisión cuya cuantía se determina por un diferencial de intereses. El importe de la provisión realizada por el Instituto en el ejercicio 1990 por este concepto asciende a 1.229 millones de pesetas. No se han encontrado incidencias destacables en las comprobaciones realizadas en relación con estos préstamos.

d) Corresponde al ICO, por Real Decreto 2434/1985, de 4 de diciembre, tramitar los expedientes de compensación presupuestaria de pérdidas y de diferencias de tipos de interés previstos en la normativa que regula los créditos excepcionales por inundaciones. El diferencial de tipos se produce como consecuencia del tipo de interés, previsto por la normativa, al que los Bancos Oficiales conceden el crédito en favor de las Corporaciones Locales, personas o entidades afectadas por inundaciones y el tipo de interés que se acuerda entre el ICO y dichas Entidades en la parte financiada por las mismas.

El importe liquidado por el Instituto por este concepto en el ejercicio 1990 asciende a 4.987 millones de pesetas, de los cuales fueron abonados por el Tesoro, en el ejercicio 1991, 1.373 millones, existiendo dotación presupuestaria por importe de 4.980 millones de pesetas. Los gastos se aplican presupuestariamente en el ejercicio siguiente a aquél en que se materializan, por confeccionar las Entidades prestamistas liquidaciones anuales que presentan al ICO al final del ejercicio, dificultando la premura de tiempo la formalización del gasto dentro del mismo, ya que el Instituto debe realizarlas anualmente para su presentación al Ministerio; problema que podría obviarse, en gran medida, si las Entidades prestamistas efectuaran sus liquidaciones en períodos inferiores a los actuales.

Las deudas por fallidos y quebrantos pendientes de pago a las restantes Entidades Oficiales de Crédito por créditos excepcionales concedidos hasta el 31 de diciembre de 1990 que, según la normativa vigente, son asumidas por el Estado, se elevan a 26.537 millones de pesetas, pendientes de dotación presupuestaria.

e) Los Préstamos Gobierno a Gobierno se otorgan por el Consejo de Ministros, con refrendo de las Cortes Generales, por motivos de política exterior, desempeñando el ICO la función de agente financiero, por la que obtiene una comisión del 1% sobre los intereses liquidados a favor del Tesoro.

En las verificaciones efectuadas se ha comprobado que, a 31 de diciembre de 1990, están vigentes tres operaciones de préstamo con los Gobiernos de Senegal, Bolivia y Marruecos, cuya situación, en millones de pesetas, se refleja a continuación:

- Capital dispuesto	21.591,8
- Capital pendiente de pago	20.648,5
- Capital refinanciado	918,1
- Capital amortizado	25,2
- Intereses pendientes de pago	0,5
- Intereses refinanciados	305,5

Se ha comprobado que, como capital pendiente de pago, se incluye indebidamente una donación al Gobierno de Bolivia por importe de 185,9 millones de pesetas, sin que la contabilización de estos préstamos, que se lleva en cuentas separadas dentro de la contabilidad del ICO, haya presentado otras incidencias significativas.

f) La deuda del Tesoro con las Entidades Oficiales de Crédito a 31 de diciembre de 1990, asciende a 113.768 millones de pesetas, de los cuales 46.228 millones corresponden a deuda directa con el ICO y 67.540 millones a deuda con las restantes Entidades Oficiales de Crédito. Integran, entre otros importes, la deuda con el ICO, además de los 7.126 millones en concepto de CARI, anteriormente señalados, 27.462 millones como importe global por diferenciales de tipos de interés, 3.870 millones del Fondo de Desarrollo Ganadero y 3.543 millones provenientes aún de la desaparecida Comisión Liquidadora de Créditos Oficiales a la Exportación. La deuda con las restantes Entidades Oficiales de Crédito, que destaca por su antigüedad, ya que la primera liquidación se remonta a 1985, tiene su origen en créditos excepcionales y de reconversión industrial, por unos importes de 26.537 y 41.003 millones de pesetas, respectivamente.

Se ha comprobado que la deuda reflejada por el Instituto en su contabilidad a 31 de diciembre de 1990 es inferior a la real en 10.389 millones de pesetas, por no incluir las liquidaciones correspondientes al último trimestre del año, que se han aplicado al ejercicio siguiente.

En la confección de los Presupuestos Generales del Estado, no se han tenido en cuenta las estimaciones comunicadas por el ICO al Ministerio de Economía y Hacienda, y se han aprobado dotaciones que han resultado, en la generalidad de los casos, inferiores no sólo a la deuda generada en el ejercicio como consecuencia de la aplicación de las distintas normas legales, sino a la deuda pendiente acumulada. Hay que destacar que, aún cuando se trata de conceptos presupuestarios ampliables, no se han autorizado ampliaciones, lo que ha dado lugar a un crecimiento constante de la deuda en los últimos ejercicios.

Según se deduce de la contabilidad del Instituto, de los 113.768 millones citados, 93.446 corresponden a liquidaciones anteriores a 1990. El Instituto tiene conocimiento de expedición de órdenes de pago por importe de 9.570 millones de pesetas. Sólo se han reconocido por el Tesoro obligaciones a favor del mismo por 732 millones de pesetas.

Como consecuencia de la aplicación de las distintas normas que regulan los mecanismos excepcionales de apoyo oficial (especialmente préstamos extraordinarios para paliar daños de inundaciones y otros daños catastróficos, así como préstamos y avales a empresas de sectores en reconversión industrial) se han estado originando gastos por importes superiores a las dotaciones presupuestarias existentes, financiados por el Grupo ICO, con el consiguiente quebranto financiero para el mismo además del deficiente reconocimiento de obligaciones en la contabilidad del Tesoro que se ha puesto de manifiesto. Con objeto de paliar esta situación, la Ley de Presupuestos para 1990 autorizó al Ministerio de Economía y Hacienda para que durante el ejercicio cancelara las deudas existentes del Estado con el Instituto, a 31 de diciembre de 1989, por compensación con los préstamos que el Estado tenía concedidos al mismo hasta dicha fecha, que se declararían vencidos en la medida necesaria para efectuar dicha compensación. Hasta el 28 de diciembre de 1990 el Consejo de Ministros no acordó compensar al ICO, y lo hizo, con efectos de 1 de enero de 1991, sólo por el coste financiero que le suponía esta deuda del Tesoro, cuantificada, a 31 de diciembre de 1989, en 108.841 millones de pesetas. La compensación consistió en disminuir el préstamo del

Estado al ICO, al tipo de interés del 6%, en 108.841 millones y sumarlo al préstamo del Estado al Instituto que no devenga interés, hasta tanto aquél no compensara definitivamente a éste por los quebrantos financieros soportados, compensación que se encontraba aún pendiente en el momento de redactar este Informe. En la cuantificación citada se incluyó indebidamente el importe de 15.712 millones de pesetas, correspondientes a deuda directa del MOPU con el Banco Hipotecario.

De esta modificación del préstamo del Estado al ICO se benefició directamente el Instituto, cuando en realidad sólo 32.006 millones de pesetas correspondían, a 31 de diciembre de 1989, a deuda directa del Tesoro con el mismo, mientras que la deuda con las otras Entidades Oficiales de Crédito ascendía a 76.835 millones.

Este Acuerdo supone una disminución de los ingresos del Tesoro por los préstamos al ICO para compensar el coste de mantener viva una deuda que, en gran parte, sigue pendiente de reconocimiento por no haberse habilitado los créditos correspondientes.

En el momento de redactar este Informe se ha finalizado la fiscalización específica, acordada por el Pleno, del Fondo de Ayuda al Desarrollo y han tenido que reclamarse, con fecha 16 de febrero de 1993, las cuentas correspondientes a 1990 de la Entidad ICOSERVICIOS, participada del Instituto.

IV.2.2.- OTRAS ENTIDADES OFICIALES DE CRÉDITO

En el momento de redactar este Informe se está programando la fiscalización selectiva de Corporación Bancaria de España, S.A. y de la operación de creación del Grupo Argentaria, que el Pleno del Tribunal ha acordado incluir en el Informe Anual 1991.

IV.2.2.1.- Banco de Crédito Agrícola, S.A. (B.C.A)

A 31 de diciembre de 1990, el saldo total de las cuentas de crédito, incluidas en el balance del B.C.A., ascendía a 314.764 millones de pesetas, importe que comprende las deudas vencidas, que representan el 9,2% de la cartera. Del total de ésta, el 17,6% corresponde a créditos excepcionales y de política económica y el 82,4% a créditos concedidos en condiciones de mercado.

Los créditos destinados a financiar la agricultura han supuesto en el ejercicio el 46% de la cartera, constituyendo, fundamentalmente, operaciones a largo plazo de adquisición de maquinaria e instalaciones. Los créditos destinados a financiar la industria agroalimentaria han representado el 39% de la cartera y se han destinado, con la misma importancia, a financiar operaciones de circulante que de medio y largo plazo.

El resto de operaciones se ha destinado a financiar programas de mejora rural (5% de la cartera), pesca (2%) y otras actividades (8%).

La cartera, que mantiene una adecuada estructura de garantías, presenta las siguientes coberturas: El 37,7% de la misma se encuentra garantizado mediante aval, el 30,4% mediante garantía personal, el 20,6% mediante hipoteca sobre explotaciones y el 4,89% mediante garantía combinada de hipoteca y aval. En el 1,66% del valor total de la cartera existe garantía prendaria, en el 1,4% garantía combinada de prenda y aval y en el 3,35% otras garantías.

Sin embargo, la gestión y administración de las inversiones crediticias ha seguido viéndose dificultada por el sistema informático existente a lo largo de todo el ejercicio, fundamentalmente, por la falta de integración (que el Tribunal ya puso de manifiesto en el Informe de fiscalización del Banco de 17 de marzo de 1987) de los dos sistemas informáticos operativos que maneja la Entidad, el que poseía con anterioridad a las operaciones de adquisición de activos y asunción de pasivos de Caja Rural Nacional (CRUNA) el 6 de julio de 1984, donde se realiza la gestión y administración de los préstamos directos, y el proveniente de CRUNA, en el que se llevan los ficheros de pólizas de crédito, operaciones de extranjero, cuentas corrientes y contabilidad. La incompatibilidad de estos sistemas, que no permite integrar la información ni acceder de uno a otro, requiere un esfuerzo adicional para la gestión de los riesgos vivos del Banco y supone importantes limitaciones, en tanto no constituyen la necesaria fuente de información que permita mostrar en todo momento, y para cada cliente, el conjunto de operaciones activas y pasivas que mantiene vivas. Además, la dicotomía entre ambos sistemas origina retrasos en la obtención de la información financiera, especialmente al término de cada mes, reduciendo la operatividad del sistema al impedir la entrada de nuevos datos hasta que el proceso de realización de provisiones y periodificación de intereses está concluido. Las mayores dificultades se encuentran en el momento del traspaso de información del sistema de gestión de préstamos al sistema contable, debido a la necesidad de volver a procesar de nuevo la información en este último.

Esta incompatibilidad de sistemas data del momento en que se produjo la adquisición de activos y asunción de pasivos de CRUNA por el Banco en 1984, momento en que se adoptó la decisión de encargar un "plan de sistemas" a una firma de consultoría. La firma encargada recomendó encontrar una solución al problema en el marco general de la estrategia del B.C.A., que entonces tenía establecido el primer convenio de colaboración con las Cajas Rurales, y la propuesta fue crear una sociedad anónima que prestara, centralizadamente, soluciones informáticas tanto al B.C.A. como a las Cajas. La Sociedad constituida "Rural Informática, S.A." supuso para el Banco una aportación al capital social de 437 millones de pesetas, pero el proyecto fue abandonado tras la denuncia del convenio de colaboración inicial que ligaba al B.C.A. y las Cajas. A principios de 1990 el Banco procedió a vender las acciones que tenía de la Sociedad. Al crearse el Grupo I.C.O., el Instituto encargó un "plan de sistemas" para el conjunto de los cuatro Bancos públicos y el propio I.C.O.. El plan, elaborado por la misma firma de consultoría, recomendó, de nuevo, la constitución de una sociedad anónima centralizada que prestara sus servicios al conjunto. Se constituyó ICOSERVICIOS, S.A. en cuyo capital el B.C.A. participaba con 53,7 millones de pesetas, previendo el proyecto ofrecer solución a los problemas del Grupo ICO en 1992. La creación de Corporación Bancaria de España, S.A., en 1991, supuso un nuevo cambio de prioridades y objetivos, decidiéndose aplicar la capacidad de ICOSERVICIOS a otras necesidades de gestión del Grupo y eliminando al B.C.A. del proyecto. El mantenimiento de una estructura de gestión provisional durante ocho años, con varios intentos frustrados de solución, muestra una deficiente planificación, a este respecto, tanto por parte del I.C.O como del B.C.A.

En los expedientes de crédito en los que se ha analizado el procedimiento de concesión no se han detectado incidencias significativas, pero se ha reflejado una política de negociación del Banco con sus clientes que se estima poco adecuada. Así, al finalizar el ejercicio 1990 la Entidad tenía trece acreditados cuyo riesgo vivo individual superaba los 2.000 millones de pesetas, lo que suponía para el Banco un riesgo total de 56.736 millones, el 18% de las inversiones crediticias. Analizados los expedientes y revisada la existencia de negociación de pago de impuestos, nóminas, operaciones de extranjero, suscripción de cédulas o pagarés del Banco pactadas en los créditos, sólo en un caso resultó haberse establecido un compromiso concreto de tramitar la gestión de impuestos, y solicitada relación de suscriptores de pagarés y de cédulas superiores a 50 millones de pesetas, a 31 de diciembre de 1990, no figura, entre éstos, ninguno de los principales acreditados mencionados, a pesar de que entre ellos aparecen sociedades en las que los créditos concedidos suponían un porcentaje muy considerable de los pasivos totales del Banco.

Por otra parte, se ha comprobado que el Banco mantenía en su cartera al final del ejercicio 1990 dos operaciones de créditos excepcionales, concedidos, por Acuerdos del Consejo de Ministros, de 29 de septiembre de 1986 y de 24 de julio de 1987, por un principal de 4.840 millones de pesetas. Aunque las condiciones de estas operaciones establecían que el Banco obtendría con rapidez el reintegro de los créditos, en el primer caso, establecida la concesión a la Cooperativa UTECO JAEN para adelantar los fondos que necesitaba para cancelar obligaciones contraídas en pleitos internacionales, se señaló en el Acuerdo que el reembolso se efectuaría con cargo al Presupuesto, a través de un crédito extraordinario que se estaba tramitando y, en todo caso, en el plazo máximo de un año, a pesar de lo cual al final de 1990 dicho crédito no se había tramitado. El segundo crédito autorizado dentro del plan de saneamiento de las Cooperativas Agrícola Provincial de JAEN y UTECO JAEN, se concertó a un año, con la garantía patrimonial de los prestatarios, y se utilizó, fundamentalmente, para cancelar las deudas de estas Entidades con MERCOSA. Las amortizaciones no se atendieron y a pesar de las reclamaciones efectuadas al Ministerio de Economía y Hacienda, la situación de las dos operaciones se mantuvo hasta 31 de diciembre de 1992, en que fueron traspasadas al I.C.O..*

IV.2.2.2.- Banco de Crédito Industrial, S.A.(B.C.I.)

En esta Entidad, el capítulo de Tesorería e intermediarios financieros alcanzó en 1990 el importe de 73.760 millones de pesetas, presentando una disminución del 30% respecto al ejercicio anterior. La inversión crediticia neta, que alcanzó el 73,5% del total del activo, ascendió a 894.021 millones de pesetas, con un crecimiento del 1% respecto a 1989, aumentando la inversión crediticia en términos de mercado y disminuyendo los créditos de política económica y excepcionales.

En relación con el activo total, la cartera de valores, con un importe de 103.818 millones de pesetas, representa un 8,5%. Durante el ejercicio se adquirieron bonos del Tesoro, produciéndose un crecimiento de la cartera respecto al ejercicio anterior del 11%.

Los recursos propios del Banco, antes de la aplicación del beneficio, ascendieron a 66.918 millones de pesetas, lo que representa un incremento anual del 3%, evolución que situó el porcentaje de recursos propios de la Entidad en el 5,5% del pasivo total.

Entre los recursos ajenos del Banco destacan los fondos procedentes del ICO, 690.136 millones de pesetas, que experimentan un descenso del 2,1% respecto al ejercicio anterior. La financiación exterior procedente de préstamos de instituciones comunitarias (BEI y CECA) creció un 16,2%, alcanzando el importe de 22.076 millones de pesetas.

En el capítulo de Intermediarios Financieros del Pasivo, con un importe de 73.736 millones de pesetas, la Entidad experimentó un incremento del 124% respecto del ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, al aumento de las cuentas a plazos, que evolucionaron de 6.296 millones, en 1989, a 45.020 millones de pesetas en 1990. Correlativamente con este incremento se ha producido un descenso en la colocación de pagarés del Banco y en los depósitos de clientes que explican la evolución negativa del capítulo de Acreedores que, con un importe de 178.330 millones, refleja el descenso del 16,8% respecto a 1989, resultado de las dificultades de captación de pasivo originadas por la competencia de las denominadas "supercuentas".

Los gastos de explotación del Banco se han situado en 6.704 millones de pesetas, con un moderado incremento del 8,2% respecto al ejercicio anterior, y el margen de explotación se elevó a 57.096 millones de pesetas, con un crecimiento del 10%.

El total de amortizaciones, saneamientos y dotaciones al Fondo de provisión de créditos se incrementó el 12% respecto a 1989,

ascendiendo a 23.617 millones de pesetas, debido, fundamentalmente, a las dotaciones realizadas para cubrir las insolvencias crediticias, dotaciones que evolucionaron de 15.346 millones de pesetas en 1989 a 18.071 millones en 1990.

En el momento de redactar este Informe se encuentra en tramitación el Informe de fiscalización de la Sociedad de Gestión de Buques, participada del Banco.

IV.2.2.3.- Banco de Crédito Local, S.A. (B.C.L.)

a) La actividad crediticia del Banco ha resultado en 1990 fundamentalmente orientada a la financiación de las Corporaciones Locales, concediendo, principalmente, créditos a medio y largo plazo, destinados a la puesta en marcha de proyectos de inversión en sectores básicos de equipamiento. La cuota de mercado del Banco en la financiación de Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas ascendió, al término del ejercicio, al 47,2%. La Entidad, como los restantes Bancos Públicos, ha ido adaptando en 1990, progresivamente, su funcionamiento al aplicado por el resto de entidades de depósito operantes en el país, mediante la aplicación de las circulares e instrucciones del Banco de España.

La inversión crediticia al final de 1990, ascendía a 994.591 millones de pesetas, experimentando un incremento del 23,1%, respecto al ejercicio anterior. Existen, además, créditos concedidos y no dispuestos que alcanzaron un importe de 201.550 millones de pesetas. El crecimiento de la inversión crediticia se ha producido, fundamentalmente, en las líneas de crédito ordinarias y en las de tipo de interés variable, que han aumentado el 23,3% y el 261%, respectivamente.

El análisis de los importes de la inversión crediticia del B.C.L. pone de manifiesto las dos características básicas de su actividad, la financiación de las Corporaciones Locales en préstamos a largo plazo, a lo que destina 929.107 millones de pesetas (el 93,4% de aquélla), y la realización del 88,3% de sus operaciones a largo plazo a tipo de interés fijo. La distribución de sus inversiones crediticias de acuerdo con los tramos de tipo de interés pone de manifiesto que el 60,9% de los créditos se sitúan por debajo del 12%, porcentaje que asciende al 22,4% para los situados por debajo del 11,5%.

Los recursos totales obtenidos por el Banco para financiar sus inversiones han procedido, en gran parte, de las dotaciones del ICO que, en 1990, tuvieron un saldo medio de 433.115 millones de pesetas, con un coste medio del 9,7% y amortización a largo plazo. Los recursos ajenos de la Entidad han experimentado en el ejercicio una elevación generalizada del coste, debido, fundamentalmente a la sustitución de las dotaciones históricas del ICO por préstamos del Instituto a coste de mercado, que experimentaron un incremento del coste medio de 0,8 puntos porcentuales, al incremento del coste de los empréstitos en circulación y financiación exterior en 0,2 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente, a la mayor utilización de fondos del sistema financiero que pasan, en saldo medio, de 74.061 millones de pesetas en 1989 a 116.550 millones, con un coste medio que se sitúa en el 14,9%, y al incremento del coste en la colocación de pagarés bancarios, que creció en un 1%.

b) En relación a 1990 se ha examinado el procedimiento de otorgamiento de créditos de la línea de apoyo al INEM, créditos que se concedieron en el mismo por 8.222 millones y que presentaron un saldo vivo al final de ejercicio de 31.326 millones de pesetas. Esta línea de crédito tiene su origen en el convenio firmado entre el Banco y el INEM en 1985, por el que aquél concede préstamos a las Entidades Locales en condiciones más ventajosas que las habituales, para financiar parte de las inversiones incluidas en los Planes de Empleo Rural (PER). La cuantía de los préstamos no puede exceder del 40% del proyecto de inversión, ni de las dos terceras partes de la cantidad subvencionada por el INEM y la concesión está ligada al otorgamiento de la subvención del INEM a las Corporaciones Locales. Las verificaciones de los expedientes han puesto de manifiesto que si bien los límites de las cuantías de los créditos se cumplen en todos los casos analizados, no existe en aquéllos detalle técnico de los proyectos, sino solamente la denominación genérica de la finalidad, lo que impide realizar el adecuado análisis de las inversiones y, en especial, valorar si el destino de esta financiación a diez años, es realmente la inversión y no el gasto corriente. Asimismo, en los expedientes figura el calendario de disposición de los fondos, pero no el de justificación del empleo de los mismos. La justificación de las inversiones se realiza a través de certificados emitidos, generalmente, por el Interventor de la Corporación y, aunque el Banco se reserva, en las condiciones generales del contrato, la facultad de comprobar la aplicación de la inversión a la finalidad a la que se adjudicó, no existe constancia de que esta facultad se haya ejercido. Se ha comprobado, por otra parte, que las resoluciones y comunicaciones del INEM aparecen enviadas a través de las Corporaciones Locales, sin que exista relación directa del Banco con el INEM, lo que disminuye el control por parte de la Entidad sobre las subvenciones anuladas por éste.

c) Los pagarés bancarios han resultado el instrumento más característico de financiación del Banco en 1990, con un saldo a fin de ejercicio de 114.659 millones de pesetas frente a 28.776 millones en 1989. Solicitada una relación individualizada de suscriptores de pagarés por importe superior a 50 millones de pesetas, aparecen pagarés por importe de 63.565 millones (55,4% de los pagarés en circulación) que corresponden a titulares pertenecientes al sector público. Los pagarés tuvieron un tipo de interés medio anual del 14,88% durante 1990. Solicitada similar relación para pagarés emitidos en 1990 con vencimiento posterior a 1996, figuran pagarés suscritos por entidades públicas por un importe de 52.487 millones de pesetas (45,8% del total y 61,2% del tramo de vencimientos de 1.996 a 2.005). En un 20% estos pagarés fueron colocados en instituciones financieras públicas con la finalidad de recolocarlos al detalle entre sus clientes, el 6% entre aseguradores de carácter público y el resto en Fondos de inversión y de pensiones de titularidad pública.

d) En el ejercicio 1990 el Banco ha constituido una provisión por importe de 5.020 millones de pesetas, en base a un estudio elaborado por una empresa consultora independiente, con la finalidad de compensar posibles pérdidas que pudiera experimentar en el supuesto de que se produjesen variaciones del tipo de interés de mercado que afectasen a su margen de intermediación.

En opinión de los auditores externos esta provisión resulta innecesaria por las características de los riesgos que pretende cubrir y consideran el importe de la misma como mayor beneficio neto del ejercicio 1990.

En esta Entidad los créditos con plazo superior a cinco años suponen el 67%, aproximadamente, del total de la cartera, mientras que los pasivos con idéntico plazo representan el 47% de los pasivos totales y un proceso alcista del tipo de interés afectaría primero a la renovación del pasivo que del activo, produciéndose un estrechamiento del margen financiero, riesgo que se acentúa al ser superior el porcentaje de pasivos a largo plazo a tipo de interés variable que el de créditos a largo plazo en similares condiciones, con lo que la rigidez relativa del activo sobre el pasivo puede presentar problemas semejantes a los acaecidos en el segundo semestre de 1990 en que la competencia por la captación de pasivo hacía previsible el mantenimiento de tipos de interés peligrosos para su futuro. Sin embargo, se estima que la mejor política de prudencia del Banco exige la progresiva adecuación, en plazos y en tipos de interés, de sus operaciones activas y pasivas.

Aunque el informe de los consultores realizó una proyección de simulaciones del patrimonio neto del Banco ante la subida de tipos de interés de mercado, no definió el importe que debía escogerse, decidiendo el Banco dotar 5.020 millones de pesetas que era el equivalente a una subida del interés de mercado de medio punto, importe que, por otra parte, no situaba al Banco en pérdidas.

e) Se ha analizado el funcionamiento de la Central de Información de Riesgos del Crédito Local (CIRLOCAL), establecida en la Disposición Final del Real Decreto Ley 3/1981, cuya función es recoger toda la información relativa a préstamos y empréstitos, exteriores o interiores, recibidos o asumidos por las Corporaciones Locales, sociedades municipales o provinciales y empresas mixtas, así como de avales concedidos por las Entidades Locales. Su gestión técnica se encomendó al B.C.L., al que el Banco de España remitía la información resultante de su Central de Información, correspondiendo a aquél obtener la correspondiente a las emisiones de empréstitos y avales de las Corporaciones Locales.

En el artículo 56 de la Ley 39/1988, de Reforma de las Haciendas Locales, se señala que el B.C.L. establecerá una Central de Información de Riesgos que provea de información sobre las distintas operaciones de crédito concertadas por las Entidades Locales y la carga financiera que supongan y que los Bancos, Cajas de Ahorro y Administraciones públicas, remitirán a aquél los datos necesarios a tal fin, que tendrán carácter público.

Los resultados del análisis efectuado reflejan, en primer lugar, la falta del adecuado desarrollo normativo de la última disposición citada. A pesar de lo dispuesto en el señalado artículo 56, la Central de Riesgos del B.C.L. viene aplicando las normas de desarrollo incluidas en el Real Decreto 2749/1981 y la Orden del entonces Ministerio de Economía y Comercio, de 7 de junio de 1982, que establecen un sistema de suministro de información diferente, a través del Banco de España y su Central de Riesgos, la información remitida por las Corporaciones Locales y la obtenida a través de otras fuentes, mientras que, de acuerdo con la Ley 39/1988, las Entidades financieras deben suministrar a CIRLOCAL información. La información de la Central de Riesgos del Banco de España es válida para analizar las operaciones de crédito concertadas en cuanto a plazo, situación o garantías, pero no proporciona información sobre las cargas financieras, siendo ésta una de las cuestiones de mayor importancia en el establecimiento de límites en la Ley citada. Hay que tener en cuenta, además, que la información mensual que se recibe de la base de datos del Banco de España llega con un retraso aproximado de 50 días, tiempo al que hay que añadir el que el B.C.L. tarda en procesar la información e incorporar la obtenida directamente. Una vez realizada la incorporación se envía a las Corporaciones el impreso normalizado donde se detallan las operaciones para que muestre su aprobación y complete los datos. El procedimiento descrito obtiene unos resultados cuya fiabilidad viene condicionada por el retraso que acumula el sistema y por la carencia de respuestas de un elevado número de Corporaciones. La falta de un censo de empresas municipales y entidades dependientes de las Corporaciones limita, también, al Banco para realizar adecuadamente el seguimiento del endeudamiento de éstas.

Con fecha 16 de febrero de 1993 tuvieron que reclamarse las cuentas relativas a 1990 de la Sociedad ASERLOCAL, participada del Banco, por no haberse rendido aún, cuentas que fueron remitidas en mayo de 1993.*

IV.2.2.4.- Banco Hipotecario de España, S.A. (B.H.E.)

El balance de la Entidad a 31 de diciembre de 1990 presenta un saldo de 1.715.814 millones de pesetas, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 16,2%.

Los grupos de cuentas que han experimentado mayor variación en términos absolutos respecto al ejercicio anterior, han sido, en el activo, "Subvenciones a recibir", con un incremento de 10.936 millones de pesetas, correspondiendo, principalmente, a la deuda del Tesoro por créditos excepcionales y subvenciones pendientes de

cobro del M.O.P.U. por la financiación por parte del Banco de viviendas de protección oficial; el grupo de "inversiones crediticias", que ha experimentado un crecimiento de 152.223 millones de pesetas, con un incremento de las provisiones por insolvencias de 20.586 millones. En el pasivo, han experimentado mayor variación "acreedores" y "empréstitos", con unos incrementos de 48.386 y 142.725 millones de pesetas, respectivamente, consecuencia de la orientación del Banco hacia una mayor captación de recursos en el sector privado en sustitución de los procedentes del ICO, propiciada por la expansión de su red de oficinas.

El beneficio obtenido en el ejercicio 1990, antes de impuestos, asciende a 14.012 millones de pesetas, habiendo aumentado respecto al ejercicio precedente en 3.190 millones, lo que representa un incremento del 29,5%.

Los productos financieros, crediticios y no crediticios, han aumentado en 25.409 millones de pesetas respecto al año anterior, y los costes financieros, principalmente los derivados de emisiones de títulos a corto y largo plazo y de depósitos, han aumentado en 21.191 millones, con una variación en el margen de intermediación de 4.218 millones de pesetas. Los gastos de explotación, aumentaron 2.059 millones de pesetas, fundamentalmente por la expansión de la red de oficinas y el incremento de personal. Las partidas de saneamientos y amortizaciones disminuyeron en 743 millones de pesetas.

La Entidad finalizó el ejercicio 1990 con 141.675 préstamos incursos en morosidad y una deuda neta de 70.579 millones, 908 millones más que el ejercicio anterior. Durante el ejercicio, como consecuencia de la descentralización del Banco y de una modificación en las escrituras, en las que anteriormente se pactaba con carácter obligatorio el fuero de Madrid, aumentaron las interposiciones de requerimientos notariales y demandas judiciales desde las sucursales. Las demandas interpuestas en el ejercicio han alcanzado la cifra de 7.688, desistiéndose 3.552 y quedando vigentes, al finalizar el mismo 17.972. De los préstamos objeto de demanda se han obtenido unos ingresos de 8.888 millones de pesetas. Los préstamos requeridos en el ejercicio han ascendido a 16.081 y se han anulado por cancelación de deuda 12.326, quedando al finalizar el mismo 45.100 préstamos requeridos. De los requeridos en el ejercicio se han obtenido unos ingresos de 16.066 millones.*

La Entidad, según datos del Departamento de Gestión de Cobros, tenía, a 31 de diciembre de 1990, 10.000 préstamos (7% sobre el número total), con 17.000 millones de deuda (24% sobre el importe total de la deuda en mora), con una morosidad superior a 5 años y 19.000 préstamos, con 13.000 millones de deuda (que representan, respectivamente, el 13% del número total y el 18% del importe de la deuda morosa), con una morosidad superior a 3 años, que no han sido aún demandados. La prioridad para plantear las demandas se fija en base a un criterio combinado de antigüedades y cuantía de la deuda, encontrándose, entre las demandas pendientes, las de cuantías menos elevadas.*

En el epígrafe de "garantías adjudicadas" se recoge el importe de las deudas que, al ser ejecutadas, dieron lugar a la asignación al Banco de determinados bienes, que se reflejan contablemente por el valor de adjudicación o el estimado de mercado, si éste fuese inferior, llevándose la diferencia entre el importe de la deuda y el de la garantía adjudicada a la cuenta "diferencias por garantías adjudicadas" que se provisiona por el total del riesgo de pérdida. A 31 de diciembre de 1990, el saldo de este epígrafe ascendía a 932 millones de pesetas.

En las comprobaciones realizadas respecto a garantías adjudicadas se han detectado deficiencias en los archivos de documentos y, en la muestra seleccionada, ha resultado que el período medio comprendido desde el primer impago del préstamo hasta la fecha de la interposición de la demanda judicial, o requerimiento notarial, por el Banco para el cobro de la deuda se eleva a 44 meses.

Todo ello pone de manifiesto que, a pesar de la mejora experimentada en la gestión del Banco en cuanto a la recuperación de la deuda vencida y no pagada, dicha gestión aún dista de ser eficaz.*

Con fecha 16 de febrero de 1993 han tenido que reclamarse, por el Tribunal, por no haberse rendido aún, las cuentas del ejercicio 1990 de FIRECO, Sociedad participada del Banco.

IV.2.3.- BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (B.E.X)

a) El saldo de las disponibilidades del Banco existentes en las cuentas de Caja y Banco de España, a 31 de diciembre de 1990, ha disminuido en un 50% con respecto a las mantenidas en 1989, mientras que el importe que figura en el epígrafe de "activos monetarios" experimentó un incremento del 175% en el mismo período, como consecuencia, fundamentalmente, de la regulación, a través de la Circular 2/1990 del Banco de España, de la materialización del coeficiente de caja mediante su desdoblamiento en dos tramos. El primero, constituido por los fondos disponibles en Caja y los depositados en el Banco de España, disminuye su importancia en relación con la establecida en la regulación anterior del coeficiente, mientras que el segundo, materializado en Certificados de Depósitos del Banco de España, ha obligado al Banco Exterior a la adquisición de estos títulos por valor de 54.766 millones de pesetas. El incremento de los "activos monetarios" tiene, también, su causa en el incremento del saldo en Letras del Tesoro, adquiridas con la finalidad de atender a una mayor demanda de cesión de estos títulos con pacto de recompra.

La evolución de los saldos medios del Banco en "intermediarios financieros", activos y pasivos, refleja una posición tomadora media, en 1990, inferior a la del ejercicio 1989, destacándose el incremento de la posición cedente en las operaciones en pesetas, en 13.565 millones, y la disminución de la posición tomadora en divisas en 3.357 millones. Si se incluyen los fondos obtenidos para atender los créditos de mediación (fondos oficiales para atender el crédito a la exportación, es decir, el crédito a la exportación una vez deducidos los créditos libres, los créditos CARI y la inversión afecta al coeficiente), la posición neta del Banco, en saldos a fin de ejercicio, entre los intermediarios financieros activos y pasivos refleja un crecimiento de los fondos captados, a pesar de la fuerte disminución de los provenientes del I.C.O..

La inversión crediticia bruta normal del Banco experimentó en el ejercicio un crecimiento del 9,8%, destacando el incremento de los préstamos y créditos en pesetas, con un aumento del 18,4%, y de los créditos CARI, con el 40,8%. Los "fondos de provisión para insolvencias" aplicables a estos créditos disminuyeron en un 12,7%. La inversión crediticia bruta en créditos de mediación experimentó una evolución de signo contrario, al disminuir en un 18,7%, y los "fondos de provisión para insolvencias" correspondientes aumentaron en el 19,3%. Al 31 de diciembre de 1990, la inversión crediticia total en situación de mora o de dudoso cobro, excluidos los riesgos de transferencia mantenidos con países muy dudosos, alcanzaba el importe de 184.970 millones de pesetas, el 14,4% del total de la inversión crediticia cuando en el ejercicio 1989 fue del 13,7%. Del importe total citado se encontraban garantizados por CESCE y otras Entidades del sector público 141.971 millones de pesetas y por otros garantes 4.168 millones, por lo que los riesgos necesitados de cobertura ascendieron a 38.232 millones, lo que, sobre la inversión crediticia bruta, asciende al 2,9%, porcentaje que en el ejercicio anterior se situó en el 2,3%. Para cubrir los riesgos de transferencia y los riesgos por insolvencia el Banco Exterior tenía constituidos, a 31 de diciembre de 1990, fondos de provisión por valor de 73.192 millones de pesetas.

El margen financiero total experimentó en 1990 un crecimiento del 9% en relación con el del ejercicio precedente, margen inferior al que resulta sin créditos de mediación, y ello porque, al incluir éstos, se produce una detracción al citado margen de 26 millones de pesetas, frente a la aportación de 1.356 millones de pesetas que tuvo lugar en 1989. La evolución del margen pone de manifiesto un proceso de reestructuración de los activos dirigido a la obtención de una mayor rentabilidad, a través de la sustitución de los créditos de mediación por operaciones de créditos en pesetas, lo que permitió asimilar el impacto del crecimiento de los costes financieros que en el conjunto de la Banca ocasionó disminuciones en el margen de intermediación, aunque, hay que destacar la distancia, negativa para el Banco Exterior, subsistente entre el porcentaje del margen de intermediación financiero de esta Entidad y el del conjunto de la Banca, medidos en relación con los activos totales medios.

El resultado neto del ejercicio ascendió a 15.675 millones de pesetas, frente a 12.465 millones en 1989, resultado que supuso un porcentaje sobre recursos propios del 15,3%, inferior al porcentaje medio de la Banca.

Los trabajos de fiscalización se han extendido a la revisión de operaciones de compraventa de valores entre el Banco Exterior de España y sus sociedades participadas, correspondientes a los ejercicios 1989 y 1990. El beneficio bruto del Banco en el ejercicio de 1989 debería disminuirse en 5.500 millones de pesetas, importe de los dividendos obtenidos derivados de la operación de venta, en 1989, de acciones del Banco de Alicante, entre el BEX y FACTOREX, ya que la operación constituyó un mero cambio de tenedor de la cartera del Banco de Alicante, dentro del Grupo Banco Exterior.*

El Banco Exterior contabilizó, en 1989, ingresos por dividendos procedentes de plusvalías generadas en Sociedades del Grupo, obtenidas mediante la venta de acciones de éstas, que cotizaban en Bolsa, a otras Sociedades del Grupo. De entre ellas, destaca la operación realizada en mayo de 1989, entre FACTOREX y el Banco: La primera Sociedad vende a la segunda 1.500.000 acciones del Banco de Alicante (participado en el 92,81% por el Banco Exterior) a un cambio del 876%. La operación, realizada en Bolsa al cambio del día, generó un beneficio en FACTOREX de 5.724 millones de pesetas, plusvalía que revirtió al Banco Exterior, vía dividendos, por valor de 5.500 millones de pesetas. Además del ajuste que debería realizarse en el beneficio bruto del Banco, como ya se ha señalado, hay que destacar que el valor de mercado se obtuvo sobre la base de que sólo un 7,19% del capital del Banco de Alicante pertenecía a accionistas ajenos al Grupo Banco Exterior, permitiendo la posición de dominio del Banco Exterior influir en las modificaciones del valor bursátil. Sin embargo, el valor teórico contable del Banco de Alicante, el 31 de diciembre de 1989, tras la incorporación de los beneficios del ejercicio, alcanzó un 301% sobre las 500 pesetas nominales de cada acción. La operación que se realizó entre sociedades vinculadas, debió conducir a aplicar el mismo valor que tenía contabilizado FACTOREX antes de la venta.

b) Respecto al ejercicio 1990 se ha llevado a cabo una fiscalización limitada en relación con las Sociedades participadas del Grupo Banco Exterior, con el objetivo de verificar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.

El capital social del Banco Exterior a 31 de diciembre de 1990 estaba representado por 61.208.091 acciones nominativas de 500 pesetas de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, con un valor total de 30.604.045.500 pesetas. El accionista mayoritario del Banco, el Patrimonio del Estado, tenía una participación del 51,39%, el INI del 8,64% y el Banco de España del 2,06%, por lo que, a la citada fecha, la participación del sector público en el capital social del Banco ascendía al 62,09%, porcentaje que determina que, aquellas sociedades en las que el Banco Exterior, en la citada fecha, participe, directa o indirectamente, en un porcentaje total superior al 80,528%, estarían obligadas, de forma indubitada, a remitir sus cuentas al Tribunal de Cuentas, a través de la IGAE, de acuerdo con la normativa vigente.

De las participadas por el Grupo Financiero Banco Exterior cumplían, a la fecha señalada, el anterior requisito, 71 Sociedades, en las que se verificó, a finales de noviembre de 1992, el proceso de rendición de cuentas, con el siguiente resultado: De las 71 obligadas a rendir cuentas de 1990, 18 lo habían hecho antes de la citada fecha, 35 habían sido requeridas por la IGAE y se encontraban pendientes de recibir en el Tribunal y 18 no habían rendido cuentas.

Las Sociedades del Grupo Banco Exterior que no habían remitido todavía cuentas a la IGAE, son las siguientes: BEX-INTERNACIONAL, EXTEFINCO-BEX, LOS BALCONES, CÍA AITANA DE INMUEBLES, REGISA ENTIDAD DE FINANCIACIÓN, DESARROLLO AGRÍCOLA Y FORESTAL, ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESTADÍSTICOS 80, PROMOCIÓN Y URBANISMO DEL CENTRO, CÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL, CÍA AGROINDUSTRIAL DEL NOROESTE, ON-ONA, EXPLOTACIÓN DE MARCAS Y SERVICIOS ALIMENTARIOS, SAINDRET, FINANCIERA DE INVERSIONES DEL CENTRO, PROMOTORA DE INTERÉS Y AHORRO, LEADER LINE, ALMACENADORA EXTERIOR, y CAFES MAITENA.

Las Sociedades cuya rendición de cuentas de 1990 se encontraba fuera de plazo, pero remitidas a la IGAE, a final de noviembre de 1992, en que se realizó la comprobación, son las siguientes: BEX PANAMÁ, BEX CHILE, BEX DIRECTO, BEX HOLANDA, BEX SUIZA, BEX PARAGUAY, BEX URUGUAY, EXTEBANK N.Y., FINCATA, FINANCIERA EXTERIOR, EXCAPITAL LIMITED, EXTERIOR LEASING CHILE, INTERNATIONAL FACTORS, GEXTERIOR, TRUBIA, HERCULES HISPANO, SAGISA, INMOBILIARIA CENEMASA, 46 NESTH 55 TH ST CORP, HESPERIA INMOBILIARIA, VALLADOLID-DOS, BEX TASACIONES, INVERSIÓN DE CRÉDITO Y DESARROLLO, KORBEL ORBESEAS, PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, BEX-BOLSA FIM, LAGOSA, FINIANCIERA COMERCIO EXTERIOR, BEX INFORMATICA, ASERRADEROS SAN VICENTE, EXTE. ADMO. PATRI. SC. LTD, CORREDURIA TECNICA ASEGURADORA, EXTEDIRECT, HERCULES PENSIONES CONSULTORA, SIMEON, IRCOSA e INMOBILIARIA SAN JERONIMO. BEX SUIZA, S.A. y ASERRADEROS SAN VICENTE fueron requeridas por la IGAE aún teniendo el Grupo Banco Exterior en ellas un porcentaje inferior al 80,528%. En 16 casos la IGAE había formulado reparos a la fecha indicada.

El Tribunal tuvo que reclamar, con fecha 16 de febrero de 1993, las cuentas de 1990 de las siguientes Sociedades del Grupo que aún no las habían rendido: BANCO EXTERIOR DEUTCHLAND, BANCO EXTERIOR FRANCE, BANCO EXTERIOR ENGLAND, BANCO EXTERIOR INTERNACIONAL, BEX HOLANDA, BEX SUIZA, BEX URUGUAY, EXTEBANK N.Y., EXTEFINCO, FINCATA, FINANCIERA EXTERIOR (ASUNCIÓN), EXTECAPITAL LIMITED (GRAN CAYMÁN), EXTERIOR LEASING (CHILE), INTERNACIONAL FACTORS, DESARROLLO AGRÍCOLA Y FORESTAL, ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESTADISTICOS 80, PROMOCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL CENTRO, CÍA ESPAÑOLA DE FINA. AGRÍCOLA Y FORESTAL, CÍA AGROINDUSTRIAL DEL NOROESTE, CÍA AITANA DE INMUEBLES, ON-ONA, EXPLOTACIÓN DE MARCAS Y SERVIC. ALIMENTIC., SAINDRET, 44 WESTH 55 TH ST CORPORATION, VALLADOLID-DOS, LOS BALCONES, FINANCIERA DE INVERSIONES DEL CENTRO, PROMOTORA INTERÉS Y AHORRO (INTASA), REGISA ENTIDAD DE FINANCIACIÓN, INVERSIÓN CRÉDITO Y DESARROLLO, LEADER LINE, PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, FINANCIERA DE COMERCIO EXTERIOR, BEX INFORMÁTICA, ASERRADEROS SAN VICENTE, CORREDURÍA TÉCNICA ASEGURADORA, EXTEDIRECT, ALMACENADORA EXTERIOR, IRCOSA, BAOBAD, CAZORLA CORPORATION, YESTERDAY DNT, SAN PELAYO, EXTEFISA y PANAMÁ INVESTIMENT HOLDING.

A pesar de que en alegaciones se manifiesta que se está al corriente de la entrega de cuentas, hay que destacar que, a 30 de septiembre de 1993, aún no habían sido recibidas en el Tribunal las cuentas de las Sociedades participadas del Banco que a continuación se indica: BANCO EXTERIOR INTERNACIONAL, EXTEFINCO, LOS BALCONES, CÍA. AITANA DE INMUEBLES, REGISA ENTIDAD DE FINANCIACIÓN, DESARROLLO AGRÍCOLA Y FORESTAL, ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESTADÍSTICOS 80, PROMOCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL CENTRO, CÍA. ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL, CÍA. AGROINDUSTRIAL DEL NOROESTE, ON-ONA, EXPLOTACIÓN DE MARCAS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS, SAINDRET, FINANCIERA DE INVERSIONES DEL CENTRO, PROMOTORA INTERÉS Y AHORRO (INTASA), LEADER LINE, ALMACENADORA EXTERIOR, BEX SUIZA, FINCATA, 44 WESTH 55 TH ST CORPORATION, INVERSIÓN DE CRÉDITO Y DESARROLLO, FINANCIERA DE COMERCIO EXTERIOR, BEX INFORMÁTICA, ASERRADEROS SAN VICENTE, IRCOSA.*

IV.2.4.- SOCIEDADES ESTATALES DE SEGUROS

IV.2.4.1.- MUSINI, Sociedad mutua de seguros y reaseguros a prima fija.

En el activo del Balance, las variaciones más significativas experimentadas por la Entidad con relación al ejercicio anterior se aprecian en el grupo de inversiones, con un incremento de 3.982 millones de pesetas y en el área de tesorería, con una disminución de 4.510 millones. El incremento en el área de inversiones se debe, principalmente, a la adquisición de un inmueble de oficinas para destinarlo a alquiler, con una inversión de 1.282 millones, y a la inversión realizada en el ejercicio para la finalización de las obras en el inmueble situado en la calle García de Paredes, nº 55, así como al incremento de las inversiones financieras.

En el pasivo, las provisiones técnicas han aumentado en 15.713 millones de pesetas y las deudas con terceros se han reducido en 17.178 millones, presentando el resto de los grupos de cuentas una variación poco significativa con relación al ejercicio anterior.

Por lo que se refiere a resultados, las primas directamente emitidas por la Mutua en el ejercicio, netas de anulaciones y sin incluir el recargo adicional, ascienden a 33.634 millones de pesetas, que junto con los 2.267 millones de primas cedidas en coaseguro, generan el importe de 35.901 millones de pesetas de primas contratadas. En lo que a las primas directamente emitidas se refiere, se ha producido un incremento del 75,5% respecto al ejercicio anterior, que ha tenido lugar, fundamentalmente, en el ramo de vida, con un aumento del 145%, y con un resultado muy desigual en las diferentes modalidades de los ramos no vida, que han presentado un incremento global del 7,6%.

Las prestaciones y gastos pagados por la Mutua en concepto de indemnizaciones, capitales renta, rescates y beneficios de los asegurados, han ascendido a 18.589 millones de pesetas, lo que representa un 32% de incremento respecto al ejercicio anterior.

La siniestralidad del ejercicio (prestaciones y gastos pagados durante el mismo, más las provisiones técnicas para prestaciones a 31 de diciembre de 1990, menos las provisiones por el mismo concepto al cierre del ejercicio anterior) ascendió a 18.782,6 millones de pesetas, lo que supone el 103,9% de las primas periodificadas, que ascendieron a 18.085,9 millones de pesetas. La siniestralidad ha experimentado un aumento del 5,6% respecto al ejercicio anterior.

El total de los gastos técnicos, netos de reaseguro, se elevó a 26.205 millones de pesetas, incrementándose el 158% respecto al ejercicio anterior.

El beneficio técnico del ejercicio ascendió a 454 millones de pesetas, con una disminución respecto a 1989 del 76,2%, debido, principalmente, al gran incremento experimentado por los gastos técnicos netos de reaseguro, que sólo ha sido compensado, en parte, por el experimentado por las primas adquiridas, también netas de reaseguro.

El resultado técnico financiero ascendió a 2.446 millones de pesetas lo que supone una disminución del 16% respecto al ejercicio anterior.

El resultado del ejercicio antes de impuestos alcanzó la cifra de 4.281 millones, con un incremento poco significativo respecto al ejercicio anterior, el 3%.

En el ejercicio 1990, se practicó a la Entidad una inspección por el Ministerio de Hacienda sobre los impuestos a los que está sometida, período 1984-1988, sin que se dotara provisión alguna suplementaria por el riesgo subyacente derivado de dicha inspección, al considerar la Entidad que tal riesgo era mínimo y quedaba suficientemente cubierto con la provisión de 1.053 millones de pesetas existente para pago de impuestos, que excedía en más de trescientos millones al importe calculado por una firma auditora para esta contingencia. Con fecha 2 de abril de 1991 se levantaron las correspondientes actas de inspección por importe de 7.079 millones de pesetas, pendientes de tramitación y firmadas de disconformidad por la Entidad, al considerar, de acuerdo con informes jurídicos en su poder, que dichas actas no tienen posibilidades de prosperar. *

IV.2.4.2.- Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

A partir de las modificaciones normativas experimentadas en 1990, constituye el nuevo objeto social de la Compañía operar en todo el territorio nacional en nombre y por cuenta propia en cualquier ramo de seguro directo no vida, así como realizar la gestión, en régimen de exclusiva, de la cobertura, en nombre propio y por cuenta del Estado, de los riesgos derivados del comercio exterior e internacional que asume éste según la legislación vigente. A 31 de diciembre de 1990 CESCE, S.A. estaba operando solamente en el ramo de crédito y en la modalidad de crédito a la exportación.

Los epígrafes que presentan en el activo una variación más significativa son "efectivo en bancos y otras instituciones de crédito, caja y cheques", con un incremento del 86%, 1.830 millones de pesetas, y "créditos", con una variación positiva de 1.299 millones, el 272%, de los cuales la Entidad tiene 864 millones contra asegurados por recibos de primas pendientes de cobro de riesgos por cuenta del Estado.

En el pasivo, las cuentas con la Administración del Estado, por la gestión de riesgos cubiertos por su cuenta, con un aumento de 3.068 millones de pesetas, presentan la mayor variación respecto al ejercicio anterior. El valor de las operaciones aseguradas por cuenta del Estado ha experimentado un aumento del 34% respecto a 1989, produciéndose el crecimiento más destacado de la contratación en la modalidad de "crédito comprador".

El seguro emitido, neto de anulaciones, ha aumentado en un 49,9% respecto al año anterior, siendo las modalidades de "crédito comprador" y "pólizas de fianzas" las que han alcanzado mayor variación. En las modalidades a corto plazo la de "póliza abierta de gestión de exportaciones" ha aumentado un 35%.

Las primas devengadas netas de anulaciones y extornos de estas operaciones alcanzaron el importe de 6.515 millones de pesetas, superando en un 85% las correspondientes al año anterior, concentrándose, fundamentalmente, el crecimiento en la modalidad de "crédito al comprador".

Los pagos por indemnizaciones sobre riesgos asumidos por cuenta del Estado han aumentado en el ejercicio 1990 un 5% con respecto a 1989, influyendo en este aumento, en gran medida, la siniestralidad con Irak y Méjico.

El importe recobrado por cuenta del Estado en el ejercicio 1990 ascendió a 18.595 millones de pesetas, lo que representa un 26% más que en 1989, destacando, por países, Angola, Méjico, Egipto y Filipinas. El porcentaje de recobros correspondiente a convenios de refinanciación ha sido del 61%, frente al 80% en el ejercicio anterior. En términos acumulativos, los recobros obtenidos sobre las indemnizaciones pagadas se situaron en 1990 en un 28%, frente al 23% correspondiente al ejercicio 1989.

La cuenta de pérdidas y ganancias presenta un beneficio después de impuestos de 1.239 millones de pesetas, con una disminución

respecto al obtenido en el ejercicio anterior de 249 millones, lo que representa el 16,7%.

El resultado técnico financiero ofrece un saldo de 1.038 millones de pesetas, el 45,2% menos que el obtenido en 1989. El resultado técnico arroja una pérdida de 810 millones, 795 millones más que en el ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, al aumento experimentado por los gastos técnicos netos de reaseguro, 232 millones de pesetas, y por otros gastos de explotación, 340 millones; a lo que hay que añadir el descenso de los ingresos de explotación, por 382 millones, que no ha podido ser compensado por el incremento de las primas adquiridas netas de reaseguro, 151 millones de pesetas.

IV.2.5.- BANCO DE ESPAÑA

En el momento de redactar este Informe se encuentra en curso la realización de una fiscalización específica acordada por el Pleno. Del análisis formal de la Memoria del Banco presentada al Tribunal se desprende que, durante el ejercicio 1990, el aumento neto experimentado por los valores del balance asciende a 637.369 millones de pesetas.

Este aumento es consecuencia, fundamentalmente, del incremento en un 8% en los activos exteriores respecto a 1989, de un 72% en las cuentas que representan saldos a favor del Banco por operaciones realizadas por cuenta del Estado y del experimentado en los créditos a Organismos públicos y Empresas nacionales (concretamente, a la Tesorería General de la Seguridad Social) que se han multipicado por más de diez, incrementos que se compensan, en parte, por la disminución de los créditos a entidades financieras en un 24% y de los saldos de la cartera de valores en un 22%.

Las causas de estas variaciones se encuentran, respecto a los activos exteriores, en el aumento de los saldos en divisas convertibles (casi un 11%), observándose, igual que en el ejercicio anterior, una clara inclinación hacia las inversiones en valores extranjeros, en concreto en dólares USA, ECUS y francos franceses.

El endeudamiento del Estado frente al Banco de España, a 31 de diciembre de 1990, se eleva, según Memoria, a 1.026.330 millones de pesetas, inferior, por tanto, al reflejado al final de 1989 en 129.717 millones, manteniéndose dentro del límite fijado por la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, según la cual el endeudamiento neto del Estado frente al Banco de España a fin de cada ejercicio no podrá exceder del importe que resulte a 31 de diciembre de 1989.

Esa disminución neta en el endeudamiento del Estado aparece en la Memoria como consecuencia de un aumento de los denominados "créditos singulares" en 1.117.690 millones de pesetas (justificado, fundamentalmente, por la creación en este ejercicio de la cuenta "Tesoro Público. Cuenta especial Ley 4/1990" con objeto de consolidar el endeudamiento neto del Estado frente al Banco de España a 31.12.89) y de una disminución bruta de 1.247.407 millones de pesetas debida, en gran parte, al aumento del saldo acreedor del conjunto de cuentas que forman la cuenta corriente del Tesoro Público.

Los créditos a entidades financieras han experimentado una disminución de 594.820 millones de pesetas motivada, fundamentalmente, por la producida en la concesión de préstamos con garantía personal para el control de la liquidez bancaria por importe de 1.728.896 millones de pesetas, como consecuencia de la aparición en el mercado de los Certificados del Banco de España, cuyo saldo al final del ejercicio, de los adquiridos con pacto de reventa, ascendía a 1.277.868 millones de pesetas.*

El conjunto de cuentas que forman el Grupo 6 (Cartera de Valores) ha experimentado una disminución en el ejercicio de 313.555 millones de pesetas, destacando la producida en "Pagarés del Tesoro. Anotaciones" y "Letras del Tesoro. Anotaciones" que, en conjunto, representan el 91% de aquélla.

Respecto al pasivo, las variaciones más destacadas han sido las siguientes:

Los fondos de reserva han experimentado una disminución durante el ejercicio de 110.106 millones de pesetas (41%) causada básicamente por la producida en las "Provisiones por correcciones valorativas en activos exteriores de reserva" a raíz del descenso, prácticamente generalizado, de los contravalores en pesetas de las divisas y en "Diferencias en valoración de activos exteriores de reserva cedidos temporalmente al FECOM" por el descenso de la cotización del dólar USA.

Las cuentas que componen el Grupo 19 (cuentas acreedoras de entidades financieras) han tenido en su conjunto una disminución de 995.037 millones de pesetas justificada, esencialmente, por un descenso muy acusado en los saldos de las cuentas de libre disposición que las entidades financieras mantienen en el Banco de España, que se ve parcialmente compensada por el importe al cierre de 1990 en certificados del Banco de España, creados a raíz de la modificación del coeficiente de caja de los intermediarios financieros con el objeto de detraer liquidez del sistema financiero.

Por lo que se refiere a la cuenta de resultados, los productos brutos obtenidos en el ejercicio ascendieron a 696.614 millones de pesetas, frente a los 639.479 millones de 1989, lo que supone un aumento del 9% debido, por una parte, a los beneficios netos obtenidos en las operaciones temporales de certificados del Banco de España (127.482 millones de pesetas), como consecuencia de la sustitución parcial de la financiación a las entidades de crédito instrumentada bajo la forma de préstamos para la regulación monetaria, por las operaciones temporales con este tipo de activos. Por otra parte, se ha producido un quebranto por compraventa de divisas de 31.128 millones de pesetas frente al beneficio obtenido en 1989 de 20.817 millones y una fuerte disminución de 63.609 millones de pesetas en operaciones crediticias con el sector privado, especialmente en los préstamos con garantía personal concedidos para el control de la liquidez bancaria a consecuencia de la irrupción en el mercado de los certificados del Banco de España como instrumento de política monetaria, ya comentada. A su vez, los rendimientos en operaciones exteriores han experimentado un incremento de 29.062 millones de pesetas, destacando las mayores inversiones en valores extranjeros frente a los depósitos a plazo en divisas convertibles.

Los gastos del ejercicio se han elevado a 460.928 millones de pesetas, frente a los 477.668 millones del ejercicio anterior, destacando la disminución producida en gastos financieros (39.200 millones de pesetas), debido fundamentalmente a la modificación habida durante este ejercicio en el coeficiente de caja de los intermediarios financieros, que provocó una minoración de 191.573 millones en la remuneración de los depósitos obligatorios para cobertura del citado coeficiente, si bien se vio compensada por la remuneración de los certificados del Banco de España.

En el conjunto de gastos la partida más importante cuantitativamente la constituye la dotación a fondos especiales y, dentro de ella, la destinada a regularización de las minusvalías netas en moneda extranjera cuyo aumento se realizó para mantener la cobertura de los activos exteriores de reserva.

La cuenta de resultados, como consecuencia de las variaciones comentadas, ha experimentado una mejora sobre la de 1989, alcanzándose unos resultados netos de 235.686 millones de pesetas frente a los 161.811 millones del ejercicio 1989.

IV.2.6.- SOCIEDAD MIXTA DE SEGUNDO AVAL

Durante el ejercicio de 1990 la Sociedad ha continuado con la suspensión de la contratación de operaciones de aval subsidiario, sin renunciar de un modo definitivo a esta modalidad, y ha desarrollado su actividad en el campo del aval solidario con aumentos significativos. Se han aprobado operaciones por 9.927 millones de pesetas, asumiendo la Sociedad el riesgo de 9.617 millones con un incremento conjunto del 205% respecto a los avales solidarios formalizados en 1989.

El riesgo vivo por avales al finalizar el ejercicio ascendió a 13.590 millones de pesetas, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 75%, debido, fundamentalmente, al aumento del saldo procedente de avales solidarios que ha aumentado un 161%, mientras que el saldo por avales subsidiarios ha disminuido en un 36%, manteniendo la tendencia a la baja de la cartera de este tipo de avales.

Debido a la supresión de la cobertura presupuestaria, la Sociedad asume los riesgos inherentes a su actividad y, en consecuencia, en el último tercio de este ejercicio se plantearon las primeras incidencias sobre la cartera de riesgos en curso que han supuesto, a fin de año, una cifra de deudores en mora superior a 191 millones de pesetas, lo que representa un 1,41% sobre la cartera de riesgo vivo. Para hacer frente a las posibles insolvencias, se han dotado provisiones en este ejercicio por 104 millones de pesetas que, unidas a los 39 millones existentes del ejercicio 1989, suman provisiones a este fin de 143 millones de pesetas, que no cubren la totalidad de los deudores en mora existentes a ésa fecha.

Los ingresos de comisiones por prestación de avales, que constituyen la actividad típica de la Sociedad, han alcanzado el importe de 110 millones de pesetas, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 103%. Los productos de inversiones financieras del ejercicio, 155 millones de pesetas, con aumento del 4% respecto a lo obtenido en el ejercicio anterior, recogen los resultados atípicos y siguen representando la partida más importante de ingreso de la Sociedad. Los gastos del ejercicio han crecido cerca de un 75% sobre los del año anterior, siendo la partida de mayor crecimiento la de dotaciones a las provisiones.

El beneficio neto de la Sociedad en este ejercicio es de 59 millones de pesetas, inferior al alcanzado en el ejercicio anterior en un 8%.

IV.2.7.- FONDOS DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

En el momento de redactar este Informe se está programando la fiscalización selectiva de los Fondos de Garantía de Depósitos, que el Pleno del Tribunal ha acordado incluir en el Informe Anual 1991.

IV.2.7.1.- Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios

Durante 1990, por Ley 4/1990, de 29 de junio, se han incrementado las aportaciones de los Bancos integrados en este Fondo hasta alcanzar el 2,5 por mil de los depósitos computables y establecido la del Banco de España en el 50% de aquéllas. Este hecho, junto con el incremento del 13% del pasivo computable de la banca, ha producido un aumento para el Fondo de los ingresos por aportaciones del 41% en relación al ejercicio anterior. Por otra parte, se ha continuado, como en ejercicios anteriores, la política de desinversión de los activos adquiridos a los bancos en crisis. Así, durante este ejercicio, se ha obtenido un resultado positivo de 66 millones de pesetas en la venta de acciones del Fondo y de sus sociedades instrumentales. En relación con la venta de inmuebles las operaciones realizadas, tanto por el Fondo como por sus sociedades instrumentales, han arrojado un beneficio de 5.705 millones de pesetas. En cuanto a la desinversión de créditos, las operaciones realizadas alcanzaron 15.500 millones de pesetas con

el siguiente origen: cobros en efectivo y por endoso de efectos comerciales, 10.558 millones; adjudicación de inmuebles y acciones en pago de créditos, 1.634 millones; realización y gestión de créditos, 1.731 millones; y cancelación por fallidos, 1.577 millones de pesetas.*

Así, las fuertes desinversiones realizadas en ejercicios anteriores y la paulatina disminución de las cargas financieras han permitido al Fondo reducir su endeudamiento con el Banco de España de 349.500 millones de pesetas, en 1989, a 276.500 millones en 1990.

La variación positiva del fondo patrimonial durante el ejercicio asciende a 393 millones de pesetas, reduciendo las pérdidas del fondo patrimonial acumulado a 45.962 millones.

IV.2.7.2.- Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro

La actividad desarrollada durante el ejercicio se ha mantenido en la misma línea de ejercicios anteriores y ha consistido en una vigilancia preventiva continuada sobre las entidades integradas en el mismo.

Este Fondo ha acordado en este ejercicio ayudas por importe de 3.100 millones de pesetas a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Granada y a Caja España de Inversiones. El Fondo ha prestado ayudas por 6.900 millones de pesetas a las Cajas de Granada, Huelva y Sevilla, y Madrid.

Las aportaciones del Banco de España y de las Cajas de Ahorro ascendieron a 7.602 millones de pesetas, lo que, unido a 6.770 millones de beneficio neto obtenido, hizo que el patrimonio acumulado del Fondo alcanzara el importe de 139.105 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1990.

El saldo de los activos contingentes se eleva a 8.987 millones de pesetas para lo que hay constituido un fondo para insolvencias de 8.540 millones.

IV.2.7.3.- Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito

En el ejercicio 1990 ninguna Cooperativa de crédito se ha incorporado al Fondo, habiéndose producido tres bajas, en el mismo, dos Cooperativas disueltas con cesión de activos y pasivos y traspaso de su personal a otras Entidades de crédito existentes y una Entidad disuelta y transformada en Sección de crédito.

Las aportaciones del ejercicio ascendieron a 2.660 millones de pesetas, importe inferior a los gastos financieros originados por el préstamo del Banco de España, que se elevan a 2.807 millones de pesetas.

Como más significativo, en el pasivo, destaca la reducción, en 3.396 millones de pesetas del endeudamiento del Fondo con el Banco de España. En el activo, es de señalar la disminución de los préstamos a las Entidades por importe de 3.226 millones de pesetas, por devolución de los concedidos en su día para el saneamiento de las mismas.

A 31 de diciembre de 1990, los activos contingentes ascendían a 1.405 millones de pesetas, para lo que hay constituido un fondo para insolvencias de 1.043 millones, que representa una cobertura del 74%.

El fondo patrimonial acumulado presenta un saldo negativo de 9.008 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1990, con una variación, respecto a final del ejercicio anterior, de 79 millones en razón de los quebrantos experimentados en el ejercicio.

IV.3.- ENTES DE DERECHO PUBLICO

En este epígrafe se recoge el análisis de las cuentas y los resultados de las verificaciones efectuadas sobre el ejercicio 1990 en relación a los Entes de Derecho Público, Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y Radio Televisión Española (RTVE), (junto con sus sociedades Televisión Española, TVE, S.A., y Radio Nacional de España, RNE, S.A.), Entes que suman sus Presupuestos a los Generales del Estado.

Se refiere también este apartado al Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISIÓN), a su participada HISPASAT, S.A. y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

IV.3.1.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

a) Las verificaciones llevadas a cabo en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional han tenido, como principal objetivo, efectuar el seguimiento de cuantas conclusiones y recomendaciones han venido incorporándose a los Informes Anuales de ejercicios anteriores, especialmente las relativas a la realización de los inventarios de bienes y derechos que integran el Patrimonio Nacional, que ya se previó en la Ley 23/1982, de 16 de julio, reguladora del mismo, y en el Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprobó su Reglamento, poniéndose de manifiesto los siguientes resultados:

El inventario general, previsto en la Ley y en el Reglamento, debía formarse por una Comisión de representantes del Patrimonio y de la Administración y, aprobado por el Consejo, elevarse al Gobierno. En él se integraría también, según las normas citadas, el inventario de las donaciones hechas al Estado a través de S.M. el Rey, inventario de donaciones que, sometido al Dictamen de la Comisión específica creada a tal efecto, a la que se señaló el plazo de seis meses para su emisión, se elevaría por el Consejo al Gobierno, para su aprobación y posterior remisión a las Cortes.

La Comisión prevista para la elaboración del inventario general se constituyó el 3 de abril de 1990. A fin de ejercicio, estaba pendiente de aprobar el Dictamen sobre la primera versión de dicho inventario general. En éste se agrupan inmuebles, derechos reales sobre bienes inmuebles, muebles de carácter histórico o valor artístico, vehículos, semovientes y bienes no comprendidos en los epígrafes anteriores, y su desarrollo presenta la siguiente situación:

Con relación al inventario de bienes inmuebles, en abril de 1990 la Comisión de inventarios recibió un primer borrador, cerrado en febrero de 1990, elaborado por el Subdirector General de Inmuebles y Recursos del Patrimonio Nacional. A 31 de diciembre de 1990 el inventario estaba incompleto, remitiéndose a diez Delegaciones del Patrimonio Nacional petición de aclaraciones, entre otras, sobre descripción, características y estado de conservación de determinados inmuebles situados en el ámbito de su actuación. Las labores de la Comisión prosiguieron fuera del período fiscalizado, hasta que se aprobó el inventario de inmuebles, cerrado a 31 de diciembre de 1991, en la reunión de 6 de abril de 1992. El Consejo acordó elevar dicho inventario al Gobierno el 22 de abril de 1992, sin que se haya producido, hasta la fecha de redacción de este Informe, decisión de aprobación definitiva. Respecto a la prevista inscripción registral de dichos bienes como de titularidad estatal (art. 9 del Reglamento) sólo se está realizando la de los bienes no históricos o artísticos, debido al elevado coste que supondría la inscripción de bienes históricos de titularidad incuestionable.

Por lo que atañe al inventario de bienes muebles histórico-artísticos, entre marzo y noviembre de 1990, se efectuaron 79.000 fichas, en las que figuran los datos previstos en el artículo 15 del Reglamento. Al finalizar el ejercicio 1990, el inventario estaba incompleto, quedando pendiente de iniciarse las tareas correspondientes en el Palacio de la Moncloa, Palacio de la Zarzuela, Palacio de Pedralbes, Patronato de Nuestra Señora de Atocha, Panteón de Hombres Ilustres, Patronato de Nuestra Señora de Loreto, y Convento del Cristo de El Pardo; si bien, en el momento de redactar este Informe el inventario se encontraba terminado en la mayoría de las Delegaciones, previéndose su inmediata conclusión.

En el período fiscalizado, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional ha procedido a iniciar la revisión y adaptación de los depósitos de bienes muebles de carácter histórico-artístico a las prescripciones establecidas en los artículos 39 al 42 del Reglamento. Se ha podido verificar que han sido revisados los contratos de depósito de veinte Organismos en los que existen bienes de esta naturaleza.

En cuanto al inventario de bienes muebles no histórico-artísticos, se ha comprobado que estaba pendiente de finalización en la fecha de cierre del período fiscalizado, y pendiente, también, de aprobación la normativa adecuada que regulase las altas, bajas y modificaciones del mismo, que se aprobaron definitivamente el 22 de mayo de 1992. El inventario, al redactar este Informe, se encuentra terminado e incorporado a una base de datos, salvo los muebles existentes en el Palacio de la Zarzuela y Palacio de Marivent, pendientes de acometer, según Patrimonio Nacional, por motivos relacionados con la seguridad.

Respecto al inventario de donaciones hechas al Estado a través de S.M. el Rey, el dictamen a emitir por la Comisión prevista en la Disposición adicional única de la Ley 23/1982, de 16 de junio, se elevó el 19 de abril de 1990 al Pleno del Consejo, que lo aprobó. Los bienes correspondientes quedaron pendientes de incorporar al inventario general hasta que el Gobierno aprobara su contenido.

Por su parte, la Disposición final 3.2 de la citada Ley previó la constitución de una Comisión encargada de elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes existentes en la Fundación "Valle de los Caídos" a los efectos de determinar su integración o no en el Patrimonio. Aunque se aprobó la creación de la Comisión, en la que sólo hay un representante del Patrimonio Nacional, no ha emitido dictamen, al seguir pendiente de ser convocada por su Presidente.

b) En las verificaciones realizadas en relación con la ejecución de las dotaciones incorporadas en el capítulo 6º de inversiones, en el que durante 1990 se reconocieron obligaciones por importe de 3.019 millones de pesetas, correspondientes, 534 millones a inversión nueva, 2.382 millones a inversión de reposición y 103 millones a inversión inmaterial, se ha detectado que obligaciones reconocidas destinadas al pago de la construcción de un nuevo buque, se han aplicado incorrectamente al concepto 630 del presupuesto "inversión de reposición", cuando deberían haberse imputado como "inversión nueva" en el concepto 620.

c) Las verificaciones relativas al procedimiento de gestión de los ingresos derivados de los arrendamientos de bienes inmuebles, han reflejado que en la contabilización de dichos ingresos se ha seguido utilizando el criterio de caja, por lo que en la cuenta de liquidación del presupuesto no figuran derechos pendientes de cobro y, al coincidir el importe del contraído con el del recaudado, no existe relación de deudores por arrendamiento. Por otra parte, el Departamento de contabilidad no ha dispuesto de una relación de recibos emitidos que sirvan de base para el contraído previo, relaciones que han permanecido en las Delegaciones y en la Subdirección de Administración de Inmuebles.

IV.3.2.- CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR.

En el Consejo de Seguridad Nuclear ha constituido objetivo esencial de la fiscalización el seguimiento de las conclusiones contenidas en el Informe Anual de 1987 relativas a la gestión de tasas. El Consejo, único organismo competente en materia de seguridad nuclear

y protección radiológica, que se financia, fundamentalmente con los ingresos procedentes de la tasa de servicios prestados, presentaba, al final del ejercicio 1990, un activo total de 7.051 millones de pesetas, aplicado, fundamentalmente, en inmovilizado material (45%), cuentas financieras (34%), y derechos de cobro derivados de la ejecución del presupuesto de ingresos (15%).

Los recursos totales del Consejo en 1990 se integran en un 54% por recursos propios, que ascendieron a 3.798 millones. En la financiación ajena, 945 millones de pesetas, cabe destacar la existencia de una póliza suscrita con el Banco Exterior de España para la financiación de la adquisición y remodelación de la sede del Ente. En el pasivo figuran también 1.308 millones de pesetas, en partidas pendientes de aplicación, que corresponden a ingresos pendientes de aplicación por liquidación de tasas.

Los resultados corrientes del Consejo en 1990, 753 millones de pesetas, disminuyeron en un 33,5%, debido, fundamentalmente, al crecimiento de los gastos de personal y de trabajos, suministros y servicios exteriores (15,9% y 17,5%, respectivamente) y a una ligera disminución en los ingresos por tasas, dentro de los cuales, los de la tasa de inspección y control de instalaciones nucleares han supuesto en el ejercicio un 92% de los derechos reconocidos netos del Consejo.

El inmovilizado material del Consejo se encuentra registrado, al término de 1990, por un importe total de 3.206 millones, de los cuales 2.491 corresponden a edificios y otras construcciones, 417 millones a equipos para procesos de información, 222 millones a mobiliario y enseres, 47 a maquinaria, instalaciones y utillaje y 29 millones a material de transportes. Los importes recogidos en estas cuentas reflejan el valor histórico del inmovilizado, contabilizado por su valor de adquisición. Se ha comprobado que el Consejo, desde su creación, no ha procedido a dotar un fondo de amortización que recogiera la depreciación sufrida por los bienes que integran su inmovilizado tangible. Dado el importe del mismo, la regularización de esta situación afectaría significativamente a los resultados del ejercicio y a los resultados pendientes de aplicación.

El Consejo recoge en el concepto presupuestario 640 "gastos de inversiones de carácter inmaterial" los gastos de estudio encargados relativos a programas o proyectos de investigación, tanto nacionales como extranjeros. El importe total ordenado en 1990, 76 millones de pesetas, constituye el total de adiciones incluidas en la cuenta de balance 214 "inmovilizado inmaterial", que presenta a 31 de diciembre de 1990 un saldo de 390 millones de pesetas. Respecto a las imputaciones realizadas en esta cuenta y en la 227.0 de "estudios y trabajos técnicos" hay que destacar que, en los informes verificados relativos a proyectos de investigación, pueden analizarse los aspectos financieros, pero no establecer clara relación entre dichos proyectos, los objetivos perseguidos y la obtención de resultados, lo que dificulta la verificación de la adecuada activación de los correspondientes gastos y de la correcta imputación a una u otra cuenta *. Por otra parte, el Ente no ha dotado en 1990, ni en ejercicios anteriores, las correspondientes amortizaciones.

En el balance del Consejo a 31 de diciembre de 1990 figura el importe de 1.059 millones de pesetas en la cuenta de "deudores", partida que se desglosa en 871 millones como "deudores por derechos reconocidos del ejercicio 1990" y, el resto, de ejercicios anteriores. Sin embargo, como reconoce la propia Entidad, deudores en sentido estricto sólo alcanzaba el importe de 117 millones de pesetas, de los cuales, 46 millones correspondían al ejercicio corriente. La causa de esta discrepancia procede de la incorrecta contabilización de los ingresos por recaudación de autoliquidaciones, ya señalada en otras fiscalizaciones. El Consejo no cancelaba las cuentas de deudores hasta que los ingresos no fueran directamente disponibles en el Banco de España, confundiendo el pago con la disponibilidad para la Entidad de los fondos, transitoriamente situados en una c/c restringida o en la Dirección General del Tesoro. Como consecuencia, se ha producido una sobrevaloración de la citada cuenta de activo de la Entidad y, correlativamente, de las partidas pendientes de aplicación del pasivo. Ha podido comprobarse, durante los trabajos de verificación, que en 1992 el procedimiento de contabilización de los ingresos por autoliquidaciones ha sido corregido y adaptado al Plan General de Contabilidad Pública.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha adoptado decisiones, en relación con las normas que regulan la tasa de inspección y control de instalaciones nucleares, que podrían estar al margen de la autorización establecida en la disposición final segunda del Real Decreto 3229/1982, de 12 de noviembre, de acuerdo con la cual, y en concordancia con el artículo 18.1 de la Ley General Tributaria, corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leyes y disposiciones tributarias, sin perjuicio del necesario desarrollo legislativo de la normativa de esta tasa.

El 16 de diciembre de 1988, el Pleno adoptó el acuerdo siguiente: "Que para el cálculo de la tasa establecida en el artículo 10 de la Ley 15/1980, se practique a los titulares partícipes de instalaciones nucleares, una liquidación mixta, basada en la aplicación del tipo de gravamen a los costes fijos y a los costes variables de la producción, con el método de cálculo y procedimiento de liquidación propuestos por la Subdirección de Administración".

Hay que tener en cuenta que el artículo 31 del Real Decreto 3229/1982, de 12 de noviembre, que regula la base imponible de esta tasa, señala que vendrá determinada por el valor de la producción anual de la instalación calculado en función del precio medio de la misma en dicho período de tiempo, y en el artículo 34 se establece el régimen de autoliquidación, sin que, a la hora de determinar la base imponible y su método de cálculo, señale la citada norma, en momento alguno, la distinción entre costes fijos y costes variables. La aplicación del método citado, acordado por el Pleno para la determinación de la base imponible, desvirtúa las competencias de gestión de la tasa que se asignan al Consejo en el artículo 48 del Real Decreto citado, según el cual, "la liquidación de la tasa, salvo en los supuestos de autoliquidación previstos en los artículos treinta y cuatro y treinta y nueve, estará a cargo del Consejo de Seguridad Nuclear". El propio artículo cincuenta y uno ratifica esta tesis, al establecer que el Consejo, "a la vista del ejemplar de la declaración-liquidación a que se refiere el artículo siguiente, podrá rectificar los errores de hecho que advierta, practicando, en su caso, la rectificación liquidatoria que proceda, con los mismos efectos de las liquidaciones a que se refiere el artículo cuarenta y ocho".

A pesar de lo manifestado en alegaciones por la Entidad, se considera que la delimitación de los conceptos para la determinación de la base imponible, con los consiguientes efectos fiscales, no corresponde al Consejo, por lo que se estima adecuado recomendar que por los Servicios de la Administración Tributaria se verifique la adecuación del procedimiento de normalización introducido, para la determinación de la base imponible, por el citado Acuerdo, sin perjuicio del ya mencionado necesario desarrollo de la normativa de la misma.*

IV.3.3.- INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR.

Los trabajos de fiscalización llevados a cabo en relación a este Instituto se han dirigido, fundamentalmente, a valorar los criterios seguidos en la planificación y presupuestación de sus actividades y el control ejercido sobre la actividad de su Oficina Comercial de Nueva York.

El ICEX ejecuta las acciones de promoción comercial exterior y fomento de las exportaciones en el marco de la política económica del Gobierno, coordina e impulsa estas acciones cuando son realizadas por las empresas del sector público y fomenta las iniciativas y acciones de promoción comercial del sector privado en el exterior. El Instituto realiza sus actuaciones en el exterior a través de las Oficinas Comerciales de España en el extranjero (OFCOMES). Dentro de las Oficinas Comerciales más relevantes, y dependiendo de las mismas, se encuentran abiertos Centros Permanentes de Promoción (CPP) en el exterior, dedicados exclusivamente, a desarrollar las actividades promocionales del Instituto.

a) En cuanto a la planificación y presupuestación del Instituto hay que señalar lo siguiente:

El cambio de tendencia en la evolución de la cobertura de las exportaciones sobre las importaciones que se produjo en los años 1985 y 1986, motivó que el entonces Ministerio de Economía y Comercio publicara un "Plan de Fomento de las Exportaciones 1987-1992", con el que se pretendía la creación de nuevos instrumentos de promoción y fomento comercial y el fortalecimiento de alguno de los ya existentes, a través de medidas de redefinición de las relaciones con las empresas exportadoras y Comunidades Autónomas, de reorganización administrativa, de fomento financiero y fiscal, y de promoción comercial. En dicho plan se preveía la reestructuración interna del Instituto utilizando criterios de sectorización, la elaboración de un Plan basado en la fijación de prioridades de inversión por productos y mercados, la implantación, como objetivo prioritario de promoción, de una "imagen comercial española positiva en el exterior que posicione nuestros productos en los segmentos medio-altos del mercado", y el incremento de la dotación presupuestaria del Instituto para situar los gastos de promoción comercial en el mismo nivel presupuestario que el de los competidores, pretendiéndose alcanzar como dotación en 1992 el equivalente al 1% del valor FOB de las exportaciones, a cuyos efectos se estableció un calendario de adaptación que partía del 0,6% en 1988. El Plan estratégico de ICEX fue aprobado en 1990 como Plan 1990-1993.

Se ha comprobado que la planificación de la actividad del ICEX se realizó sobre las consideraciones anteriormente apuntadas, pero la evolución de los Presupuestos Generales del Estado no recogió en 1990 los importes previstos. Por otra parte, en 1990 el Instituto ha puesto de manifiesto su falta de capacidad para poder llevar a cabo las actividades planificadas, lo que constituye el obstáculo más importante para que pueda asumir mayores crecimientos de presupuesto. El importe de las ayudas que se encuentra justificado se imputa a las cuentas de gastos, realizándose, en 31 de diciembre de cada ejercicio, una provisión por las ayudas aprobadas pendientes de justificación. Al finalizar 1990, de un total de 18.046 millones de pesetas para gastos, el ICEX sólo tenía justificados el 24%, habiendo realizado por el resto una provisión. Hasta dicho ejercicio, se había producido un crecimiento permanente de las provisiones en relación con los gastos totales. Además, los importes provisionados en un ejercicio y no gastados efectivamente en ejercicios posteriores se registran como reintegros, lo que produce un exceso de tesorería en la Entidad no acorde con su presupuesto. La evolución creciente de dichos reintegros muestra el grado de ejecución del presupuesto anual está directamente relacionado no sólo con la complejidad de las actividades a desarrollar, sino también con la capacidad de gestión del Instituto: En el ejercicio 1990 y en los dos ejercicios anteriores, los reintegros se han situado entre el 12% y el 13% de los gastos de promoción y su importe acumulado en dichos ejercicios ha ascendido a 6.315 millones de pesetas.

Por otra parte, a pesar de que el Plan de Fomento de la Exportación estableció que la coordinación de la Administración Central y la Autonómica en esta materia se realizaría a través de los Consejos Asesores Territoriales de Exportación, y de que éstos se crearon por Orden de 18 de febrero de 1988, a finales de 1990 se habían

constituido sólo los de ocho Comunidades, y los convenios genéricos suscritos al margen de aquéllos con las Comunidades, en la generalidad de los casos, no se han plasmado en acciones concretas.

b) En relación con la Oficina Comercial en Nueva York, hay que destacar, en primer término, cómo la evolución de las exportaciones de España a EE.UU. se ha caracterizado por un estancamiento producido en los cinco años anteriores al ejercicio 1990, período en el que la cobertura "exportaciones/importaciones" ha disminuido, pasando del 72%, en 1986, al 44%, en 1990, y España de ocupar el número 21, como suministrador de EE.UU., en 1986, al número 27 en 1990, evolución que no es ajena a la progresiva depreciación del tipo de cambio del dólar USA frente a la peseta, desde 1985 hasta el ejercicio que se está analizando.

La Oficina Comercial de Nueva York es una de las cinco Oficinas Comerciales del ICEX en EE.UU. y realiza actividades de promoción y apoyo al exportador en los sectores de vinos, agroalimentarios frescos y transformados, moda, bienes de consumo y productos industriales y tecnología. El presupuesto aprobado para sus actividades de promoción en 1990 fue de 1.142 millones de pesetas, lo que supone un 6% del presupuesto del capítulo 6º del Instituto.

La norma de control interno de gestión y liquidación de gastos de promoción del ICEX por las Oficinas Comerciales, establece que "cada propuesta de gastos deberá justificarse con una cuenta de liquidación, que se remitirá a la Dirección Administrativo-Financiera del ICEX, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la finalización de la actividad correspondiente, que las cuentas relativas a planes sectoriales se justificarán parcialmente por períodos semestrales y que las facturas originales se acompañarán a la cuenta de liquidación, debiendo corresponder sus fechas al ejercicio a que se refiera la actividad aprobada. Las verificaciones realizadas ponen de manifiesto el incumplimiento de esta norma hasta el punto de que, en mayo de 1992, todavía estaban pendientes de justificar por la Oficina Comercial, o de aprobar por los servicios centrales, la mayor parte de las propuestas de gasto tramitadas en 1990, el 65,4% de las mismas, por un importe de 747 millones de pesetas. Dado el alcance de este incumplimiento, se realizó una prueba idéntica con las propuestas de gasto de las Oficinas Comerciales de Dusseldorf y Londres en el ejercicio 1990, resultando que a la misma fecha, el porcentaje se reducía en éstas al 6,8% y 9,6%, respectivamente.

Al analizar los estados financieros de la Oficina de Nueva York, -que son instrumentos de control que no se encuentran integrados en las cuentas del ICEX, al contabilizar éste centralizadamente según sus propios registros-, y contrastarlos con las normas del Instituto, se ha puesto también de manifiesto que el balance elaborado por dicha Oficina no se acomoda a la estructura aprobada por éste, y que las cuentas acreedoras de aquélla no distinguen las deudas contraídas con el ICEX de las procedentes de los anticipos entregados por los exportadores. Además, el criterio seguido por la Oficina para determinar el saldo de las cuentas acreedoras, en sus estados financieros, difiere del aplicado por el ICEX para recoger los derechos de cobro frente a las Oficinas Comerciales. Así, los fondos pendientes de justificar, según la OFCOME, ascienden a 9 millones de dólares y, según los registros del ICEX, a 14 millones de dólares, diferencia que se debe a que la Oficina considera los gastos justificados cuando remite la cuenta de liquidación al Instituto y éste lo hace cuando el Departamento que formuló la propuesta los revisa y la Dirección Administrativa Financiera los aprueba.

En la partida de "ingresos diversos", la Oficina contabilizó 137.994 dólares procedentes de intereses bancarios a los que se han restado los gastos bancarios, contraviniendo las disposiciones del ICEX relativas a la no compensación, a pesar de lo manifestado en alegaciones, y la partida de diferencias, con un saldo de 94.595 dólares no ha sido detallada en una hoja anexa como establece la normativa interna del Instituto.*

La revisión de la documentación remitida por la citada Oficina ha puesto de manifiesto, con relación a las normas internas de control de la tesorería para las OFCOMES, que las conciliaciones bancarias se realizan dos o tres meses después de la fecha a la que están referidas, perdiendo la capacidad de control que deben tener; la fotocopia de la última página del libro de bancos, que la Oficina debe remitir al Instituto, se envía sin la firma del responsable de gestión de fondos, contraviniendo la normativa interna del ICEX, y disminuyendo, a pesar de lo que manifiesta el Instituto en alegaciones, las garantías de control, y que los intereses bancarios, 14 millones de pesetas, de abril a diciembre de 1990, de las cuentas de la Oficina de Nueva York, han sido registrados como ingresos del Instituto en 1991, debido, según los responsables de éste, a la tardanza en la remisión de las liquidaciones.*

Por lo que se refiere al personal de la Oficina de Nueva York, personal de la Dirección General de Política Comercial del ICEX y becarios del Instituto y de Comunidades Autónomas, se encontraba en 1990, en su totalidad, contratado con cargo a los créditos de inversiones y mediante contratos temporales, y en los contratos de trabajo fiscalizados, seis se han encontrado sin firmar, incumpliendo lo previsto en la propia normativa interna del Instituto de comienzos de 1989, por lo que las razones de homogeneidad a las que se alude en alegaciones no se estiman suficientes.*

IV.3.4.- RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (R.T.V.E.)

A continuación se recogen los resultados obtenidos de la fiscalización de determinados aspectos de la gestión en 1990 del Ente RTVE y de las Sociedades del Grupo, TVE, S.A. y RNE, S.A.:

El Ente Público RTVE obtuvo, en el ejercicio 1990, un resultado negativo de 24.311 millones de pesetas, frente al resultado positivo de 31.200 millones del ejercicio anterior, como consecuencia, fundamentalmente, del vuelco espectacular de los resultados de explotación tras la aparición de las televisiones privadas y autonómicas, resultados que evolucionaron de 18.529 millones de pesetas en 1989 a 32.917 millones de resultado negativo en 1990. Además, disminuyeron en un 14% los resultados financieros, que alcanzaron 8.686 millones de pesetas, por el menor voluman de fondos disponibles a corto y la desaparición de los resultados extraordinarios positivos, ya que, frente al importe de 2.605 millones que alcanzaron en 1989, en 1990 se transformaron en 80 millones de resultados negativos.

En relación con la actividad de explotación, el Ente Público RTVE centraliza, desde 1986, la actividad comercial de las dos Sociedades que componen el grupo RTVE, TVE, S.A. y RNE, S.A., recogiendo en su contabilidad, como se analizó en la fiscalización específica realizada por el Tribunal, la adquisición de los programas de radio y televisión destinados a la comercialización y los ingresos derivados de la venta de programas y publicidad.

En el ejercicio 1990, los ingresos derivados de la publicidad de RNE, SA tuvieron un incremento del 29,6%, en tanto que los ingresos por publicidad en TVE, SA sufrieron una disminución del 13, 2%, fundamentalmente debido al impacto de la aparición de las televisiones privadas.

La situación financiera del Ente Público RTVE en 1990 se mantuvo a pesar de la disminución significativa del fondo de maniobra, que alcanzó un importe de 45.415 millones de pesetas, el 41% con respecto al ejercicio anterior. La evolución en 1990 de "deudores" muestra una mejor gestión de cobro de los clientes por ventas y prestación de servicios que disminuyen en 5.742 millones de pesetas. A este respecto hay que señalar que el Ente efectúa las dotaciones a la provisión para insolvencias de una forma global, sin que exista un detalle de clientes o deudores a los que está destinada. La provisión se ha incrementado al final del ejercicio en 452 millones de pesetas y se han registrado pérdidas por créditos incobrables por importe de 126 millones.

El inmovilizado material del Ente ascendía, en su importe bruto, a 16.355 millones de pesetas en el ejercicio y la amortización acumulada existente a 3.435 millones, correspondiendo una dotación del ejercicio de 924 millones de pesetas. Hasta el ejercicio 1986, inclusive, no existió una política de amortizaciones, registrándose como tales los importes que se fijaban en los presupuestos. En los ejercicios 1987 y siguientes se ha procedido a dotar la amortización de acuerdo con la vida útil estimada de los bienes.

Las subvenciones de capital registradas por el Ente ascendieron a 4.851 millones de pesetas. En el ejercicio 1989 se procedió a imputar a resultados extraordinarios 2.355 millones de la subvención de capital de los ejercicios 1983 a 1988, y a ingresos del ejercicio el 10% del importe inicial. En 1990 se han llevado a resultados 449 millones. La justificación del importe elegido no tiene otro soporte que la expresión recogida en las normas de valoración, apartado h): "Ante la imposibilidad de determinar qué activos han sido financiados con las subvenciones de capital recibidas, se imputan éstas al resultado del ejercicio por décimas partes".

Si se compara la relación entre los importes del inmovilizado material bruto y la amortización acumulada, con la que resulta de enfrentar el ingreso recogido por el traspaso de la subvención con el importe de la dotación a la amortización del inmovilizado, se aprecia que RTVE está aplicando con mayor celeridad el ingreso procedente de las subvenciones que la amortización de los activos subvencionados.

IV.3.4.1.- Televisión Española (TVE), S.A.

a) Las verificaciones llevadas a cabo en TVE, S.A., han reflejado que los gastos de producción del ejercicio 1990 ascendieron a 67.194 millones de pesetas, con un incremento, en relación con el ejercicio anterior, del 32%.

El crecimiento de los gastos de producción en 1990 se debe, en primer lugar, al incremento de "los gastos comunes de producción", que experimentaron un aumento del 150,6%, debido, fundamentalmente, a las compensaciones en concepto de derechos de autor a la Sociedad General de Autores de España, a los alquileres de medios de producción en TVE-BARCELONA y al incremento en la utilización de circuitos y líneas de radio. También ha resultado elevado el crecimiento del coste de la "producción propia" -la obtenida mediante la intervención directa de los medios humanos y materiales propiedad de TVE, S.A., o contratados directamente por la misma-, que se situó en el 43,2% debido a la competencia con otras televisiones y a la generalización de contratos con productoras externas. Por otra parte, es destacable el descenso de la "producción financiada" principal manifestación de la "producción externa" -que se obtiene por aplicación de medios cuya contratación o propiedad corresponde directamente a una productora externa-, como consecuencia de la finalización de las grandes producciones del periodo anterior. En 1990 se produjo, también, el estancamiento de la "producción ajena", -consistente en la adquisición por TVE de los derechos de exhibición de producciones cinematográficas a distribuidoras nacionales o internacionales- debido a los excedentes de material filmado procedentes del acopio realizado en 1989.

En el Informe de fiscalización del Tribunal relativo al Ente y a sus Sociedades, se puso de manifiesto, al tratar de la producción, las deficiencias de planificación en la estructura y funcionamiento de TVE, S.A.. Solicitados los planes de emisión, adquisición de programas y producción, existentes en 1990, la Dirección-Gerencia de Comercialización de Programas de RTVE, contestó por escrito, respecto a los planes de adquisición de programas manifestando que "tales planes no han existido porque cualquier plan de adquisición

de programas debe dar respuesta a un plan de emisión y este último sólo existe desde los ejercicio 1991-1992". La Dirección Económico Financiera de TVE, S.A. facilitó, sin embargo, como respuesta a la petición del plan de emisión, los "esquemas de emisión" trimestrales correspondientes a las dos cadenas. La disparidad de criterios sobre el plan de emisión entre RTVE y TVE, S.A. pone de manifiesto las diversas concepciones sobre planificación existentes, la que considera que el plan de emisión constituye el elemento clave del resto de actividades, que permite producir lo que debe emitirse, y la que parte de que hay que emitir lo que se ha producido. Aquella idea, recogida en el plan estratégico de RTVE de 1984, no ha sido puesta en práctica hasta el ejercicio 1991, según el Ente. Los "esquemas de emisión", elaborados con una anticipación trimestral, en los que se establece la distribución horaria de los días de la semana entre los diferentes programas, ha sido el procedimiento de planificación habitual en el período fiscalizado, presentando como principales limitaciones, la imposibilidad de realizar políticas a medio plazo en las que se fijen los porcentajes de participación de cada tipo de producción en el tiempo total de emisión, la generación de sobreproducción o de excesivo acopio de producción ajena, (la falta de definición de la emisión a medio plazo conduce a que los diferentes Jefes de Área intenten salvar su responsabilidad mediante el incremento de los stocks de programas), además de que en el caso de la producción cinematográfica comprada, al estar generalmente limitados los derechos de exhibición a un determinado tiempo, mantener un stock elevado permanente, puede ocasionar la caducidad de algunos de estos derechos.

Como consecuencia de esta deficiente planificación las variaciones de la emisión de TVE, S.A. se producen, generalmente, por reacción ante factores externos, perdiendo iniciativa frente a la competencia.

b) Efectuado el seguimiento de las series de "producción externa" fiscalizadas y que se encontraban pendientes de finalización al elaborar el Informe del Tribunal referido al periodo 1983-87, ha resultado:

b.1) En la serie "La Forja de un rebelde", TVE, S.A. amplió el contrato de producción en 503 millones de pesetas, en el ejercicio 1989. La serie tenía presupuestados, hasta ese momento, 1.834 millones para producir 6 capítulos, de 75 minutos de duración. La ampliación tiene su justificación, según los firmantes del contrato, en el mayor coste de los decorados, consistentes en la reproducción de la "Gran vía" madrileña en los años 30. A pesar de que se cita en el contrato la existencia de una memoria justificativa del incremento del coste, en el expediente de la serie no se encuentra disponible. Una vez finalizada la serie puede evaluarse el coste total en 2.337 millones de pesetas. Respecto a la gestión y control de la serie, hay que señalar que, TVE, concedió anticipos de producción por importe de 1.505 y 78 millones de pesetas en los ejercicios 1989 y 1990, respectivamente. De la documentación examinada se desprende que los anticipos se concedieron aunque existían cantidades pendientes de justificar, en algunos casos, superiores a los 500 millones de pesetas. El plazo de justificación de los anticipos, establecido en 30 días, ha resultado generalmente incumplido.

TVE, aceptó la concesión de prórrogas para la entrega de los materiales sin aplicar las penalizaciones pactadas contractualmente. Inicialmente, en el contrato de 10 de mayo de 1989, se acuerda un retraso de cinco semanas, quedando el plazo final fijado el 5 de diciembre de 1989. El 2 de enero de 1990 tiene entrada en el registro de la producción externa de TVE, la petición de una nueva prórroga hasta el 15 de abril de 1989. El 10 de enero de 1990 se concede ampliación de plazo hasta el 23 de marzo de 1990.

b.2) La serie de producción externa "Réquiem por Granada", en cuyo contrato se acumularon incumplimientos de las productoras, expuestos en el Informe específico del Tribunal, fue objeto de la realización de un nuevo contrato, el 2 de agosto de 1989. TVE aceptó, en el nuevo contrato, que la rescisión del originario se produjera "de mutuo acuerdo", sin que en las estipulaciones se hiciera constar los múltiples incumplimientos de las productoras contratantes. Paralelamente, se acordó que TVE compensaría a las productoras por los gastos y perjuicios producidos durante el tiempo de paralización.

TVE aceptó la reducción del número de capítulos, manteniendo el mismo presupuesto, desde los diez previstos en el contrato de 23 de mayo de 1988, a los 8 aceptados en el nuevo contrato. El tiempo de cada capítulo se reduce, desde los 55-58 minutos del primer contrato a los 50-55 del segundo, comprobándose, por los contratos de coproducción realizados, que la duración final de la serie ha sido de 400 minutos. Esta reducción, según el nuevo contrato, se justificó por la carestía de precios y los gastos y perjuicios de la productora durante el tiempo transcurrido en la suspensión, así como la mejora de calidad de la serie. El tiempo transcurrido entre ambos contratos es de un año y tres meses, mientras que la disminución del tiempo de rodaje es el 27,3% del inicialmente pactado.

El contrato originario de producción de la serie fijaba un beneficio industrial del 7% para la productora. Al ser el presupuesto de 1.066 millones de pesetas, el beneficio se situaba en 75 millones. Con posterioridad a la fecha del contrato se produjo un acuerdo entre la Asociación de productores cinematográficos y Televisión por el cual se establecieron unos porcentajes mínimos decrecientes sobre bases ascendentes. Este nuevo acuerdo establece el 15% como porcentaje de beneficio industrial para proyectos inferiores a 600 millones de pesetas y el porcentaje mínimo del 7% para proyectos superiores a 1.300 millones, entendiendo TVE que el beneficio industrial debe aplicarse por tramos. Al rescindirse el contrato de mutuo acuerdo y realizarse uno posterior en la fecha señalada, en el que TVE no establece la continuación expresa de pacto sobre el beneficio industrial originario, se produce, con posterioridad a la realización del segundo contrato, una solicitud de la productora de asimilación del beneficio industrial al resultante del nuevo acuerdo. TVE aceptó esta asimilación, que supuso un incremento del coste de la serie de 81 millones de pesetas.

El 23 de enero de 1990, la productora solicitó una ampliación de presupuesto de 92 millones de pesetas, motivada, en parte, por el incremento de coste del reparto artístico y, por otra parte, por el aumento de costes acaecidos por el transcurso del tiempo desde el 2 de agosto de 1989 y el comienzo del rodaje en 1990. La cantidad ampliada por este último concepto ascendió a 36 millones de pesetas.

El 12 de noviembre de 1990, la productora solicitó ampliación del plazo de entrega de los materiales filmados, sin verse sometida a las penalizaciones pactadas en el contrato. TVE accede a esta ampliación señalándose, como fecha definitiva, el 30 de abril de 1991. El 14 de mayo de 1991 se autorizó la devolución de los avales, una vez entregados los materiales. Sin embargo, el 21 de agosto de 1991 todavía se encontraban retenidos, al haber surgido problemas con los materiales entregados. El retraso en el incumplimiento de la productora no llevó al establecimiento de penalizaciones.

b.3) La serie "Sandino" se acordó, inicialmente, como producción en régimen de administración, el 27 de diciembre de 1988, con un presupuesto cerrado de 1.223 millones de pesetas, obligándose la productora a asumir cualquier costo que superara esta cantidad. La serie inicial constaba de cinco capítulos, de 55 a 58 minutos cada uno, más un largometraje de duración convencional. El 10 de mayo de 1989 se rescindió el contrato de mutuo acuerdo y se pactó la realización de la serie como producción financiada, declarando la productora haber recibido 514 millones de pesetas y comprometiéndose a justificar abonos pendientes por valor de 148 millones de pesetas en el plazo de un mes. El objeto de este contrato era producir un largometraje convencional y, como producto complementario, utilizar el material rodado para realizar una serie de tres capítulos de 50 minutos.

El desarrollo posterior de la serie se ha caracterizado por el conflicto entre la productora, TVE y el productor delegado para aceptar las facturas que cancelan los anticipos pendientes de justificación del período de producción en régimen de administración. Así, las liquidaciones 1032 y 1033, de fechas 4 de julio y 2 de noviembre de 1989, no tienen el visto bueno del productor delegado hasta el 1 de febrero de 1991. TVE aceptó conceder una prórroga para la entrega de los materiales hasta el 1 de julio de 1990, condicionado a la presentación de un nuevo aval que cubriera hasta esta fecha. La factura 1038 presentada por la productora corresponde a los costes del aval. En la factura 1040, de 2 de octubre de 1991, correspondiente al último plazo del contrato por 33,6 millones, se descuentan 19,2 millones de la cuenta de la productora correspondiente al saldo pendiente de justificar por el contrato de administración.

En cuanto al contrato de coproducción con la empresa Umanzor, descrito en el Informe específico del Tribunal, hay que señalar que no se ha recibido la aportación de 160 millones de pesetas a que estaba obligada la productora nicaragüense; la productora encargada del programa dejó depositado a Umanzor, en Nicaragua, un conjunto de bienes propiedad de TVE, S.A. que deberían haber sido objeto de liquidación o devueltos, por valor de 755.535 dólares USA. TVE envió una carta al Embajador de España en Nicaragua, para que realice gestiones con la empresa Umanzor, de la que se desconoce su domicilio actual. Este requerimiento fue repetido el 14 de enero de 1992 sin resultados.

c) Por su parte, del análisis de expedientes de programas de "producción propia" hay que destacar cómo su aumento en el ejercicio 1990 debe ser matizado por el incremento constante de los contratos con productoras externas para realizar, en régimen de colaboración, parte de los trabajos de producción propia. En 1990 se firmaron contratos con productoras externas, al menos, por valor de 2.192 millones de pesetas. En esta modalidad, TVE suele aportar el equipo técnico para la realización del programa y los estudios, mientras que la productora se ocupa, generalmente, del contenido y el reparto artístico. En 1990 existieron contratos de colaboración que, simultáneamente, pusieron en manos de productoras externas el contenido artístico de los programas y establecieron un número muy elevado de programas contratados, procedimiento que compromete a TVE con independencia de la calidad artística del producto y su impacto en la audiencia. Es el caso concreto de los programas "Pista de estrellas" (26 programas contratados) y "Corazón" (39 programas).

Sigue sin resultar posible conocer el coste total de los programas de producción propia, ya que las propuestas de gasto sólo amparan los gastos por recursos ajenos a TVE, con la consiguiente infravaloración de la producción. La falta de imputación de los costes internos limita cualquier análisis económico de la evolución de la actividad productiva de TVE.

El control de la producción de programas a través de la documentación recogida en los expedientes es insuficiente. Estos incorporan las propuestas de gastos, la relación de anticipos, los justificantes de gastos, y una relación de los documentos incorporados denominada "seguimiento del programa". En la muestra de expedientes revisados, sólo en el 50% de los casos se ofrece explicación de las partidas presupuestarias excedidas; el 33% de los expedientes carecen de relación de personal fijo adscrito al programa; el 60% de las relaciones de personal colaborador adscrito a los diferentes programas se ha comprobado que son incompletas o no existen; y en el 67% de los expedientes no existe liquidación

final del programa. En ninguno de los programas revisados existe informe final sobre la evaluación de los resultados.

La normativa reguladora de la concesión y justificación de anticipos es incompleta y se encuentra desfasada: De acuerdo con ella, no pueden concederse anticipos si existen dos entregas anteriores sin justificar; el plazo de justificación es de un mes, y pueden ser receptores de los mismos, el productor, el gestor económico o una persona debidamente autorizada. Las verificaciones realizadas han puesto de manifiesto los siguientes extremos: No existe en 1990 control individualizado de los anticipos. TVE tiene abierta una cuenta justificativa a cada uno de los perceptores en la que se registran los que ha recibido (pudiendo ser éstos de diferentes programas). La presentación de justificantes de gastos minora el saldo deudor de la cuenta sin que pueda conocerse a qué remesa de fondos se refiere. Por otra parte, el límite de concesión de anticipos en relación con entregas sin justificar se ha incumplido, bien directamente o a través de la concesión de anticipos a otras personas del programa. En el caso del programa "Para Elisa" aparecen siete perceptores de anticipos, de los cuales, en tres casos no ha sido posible establecer cuál es la relación laboral que mantienen con TVE, S.A., por la deficiente información del programa. El plazo de justificación de 30 días se ha incumplido con frecuencia, así, en el programa "Pista de Estrellas" figura un anticipo por importe de 1,9 millones, concedido en mayo de 1990 y pendiente de justificar en julio de 1991.

Existen programas en los que se conceden elevadas cuantías en anticipos. En el programa "Para Elisa" se tramitaron, en 1990, anticipos por valor de 139 millones de pesetas. En el programa "Hasta luego cocodrilo" ha existido, entre mayo y noviembre de 1990, un saldo medio aproximado a los 30 millones de pesetas por este concepto.

En la muestra de anticipos revisados se ha comprobado que el 9% de los mismos se pagó mediante transferencia, el 21% en metálico, el 34% a través de cheques y en el 36% no figura el medio de pago utilizado, resultando excesivo el número de anticipos tramitados por caja.

En 1989 y comienzos de 1990, según los responsables del área, se abrieron cuentas corrientes en Entidades Financieras Públicas a nombre de los perceptores de anticipos de mayor cuantía, con la denominación "Producción TVE". Los intereses de estas cuentas se liquidaban a favor de TVE y se realizó el esfuerzo de incrementar el pago de anticipos mediante cheques a abonar en las mismas. Sin embargo, el sistema fue progresivamente abandonándose, al no ser obligatorio. No ha existido, durante 1990, un seguimiento adecuado de los deudores por anticipos. Las reclamaciones de cantidades pendientes comenzaron a realizarse en escritos fechados en julio de 1991.

IV.3.4.2.- Radio Nacional de España, (RNE), S.A.

En relación con el ejercicio 1990 en RNE, S.A. destaca, en primer lugar, la disminución de los resultados en un 12% respecto al ejercicio precedente, alcanzando un importe final positivo de 49 millones de pesetas.

Los resultados extraordinarios, por 272 millones, que se han producido, fundamentalmente, como consecuencia de cambios de criterios de valoración, han resultado el elemento de equilibrio de una gestión crecientemente deficitaria. Al respecto hay que señalar, en primer lugar, que en 1990, se ha procedido a imputar a resultados las subvenciones de capital concedidas a la sociedad, cuyo importe ascendió a 782 millones de pesetas. El criterio utilizado ha consistido en amortizarlas en diez años. Esta decisión ha supuesto contabilizar, como ingresos del ejercicio 78 millones de pesetas en "subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio" y 386 millones de pesetas en "ingresos extraordinarios" al proceder RNE, S.A. a regularizar la actuación de ejercicios anteriores, lo que supone una incidencia positiva en resultados extraordinarios de 464 millones de pesetas. Para valorar esta decisión debe tenerse en cuenta que el Plan General de Contabilidad, aprobado por R.D. 1643/1990, de 20 de diciembre, en su norma de valoración nº 20, establece que las subvenciones de capital no reintegrables se imputarán al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con dichas subvenciones, Plan que resulta aplicable para los ejercicios iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 1990. La premura en aplicar esta norma no ha venido acompañada con ningún estudio o valoración relativo a la depreciación efectiva de los activos en los que se materializó la subvención. En segundo lugar, la Sociedad ha procedido a dotar una provisión por 273 millones de pesetas, debido a que la Ordenanza Laboral aplicable a RNE, S.A. establece que la Sociedad abonará a cada trabajador fijo en activo una paga extraordinaria por cada diez años de servicio ininterrumpido. El importe devengado y no pagado en 1990 ha ascendido a 68 millones de pesetas, contabilizándose en "gastos de personal", y el importe devengado en ejercicios anteriores, 205 millones de pesetas, se registró en gastos extraordinarios.

Los resultados extraordinarios positivos del ejercicio presentaron un saldo, como anteriormente se señaló, de 272 millones de pesetas, de los cuales, 259 millones son consecuencia de los cambios de criterio adoptados por la Sociedad, y han compensado las pérdidas de la actividad ordinaria de 223 millones de pesetas.

En el análisis de los resultados de Radio Nacional hay que tener en cuenta el hecho de que la gestión de sus recursos comerciales (publicidad, anuncios privados, entre otros) dependen, desde 1986, del Ente Público RTVE, a través de su Dirección Comercial. Si se compara el importe de las ventas en la contabilidad de Radio Nacional (25.600 millones), con los ingresos efectivamente devengados por el Ente Público RTVE por este concepto, (1.522 millones), se puede concluir que la diferencia supone una subvención de hecho del Grupo RTVE a RNE, S.A. por un importe de 24.078 millones de pesetas. Los ingresos procedentes de su actividad comercial no alcanzan a cubrir siquiera la décima parte de los gastos de explotación.

La situación financiera de RNE, S.A. se vió agravada en 1990 al aumentar el fondo de maniobra negativo existente en 1989, pasando de 146 a 2.682 millones de pesetas, situación que se produce coincidiendo con la evolución negativa de los resultados del Grupo que ha derivado en unas pérdidas consolidadas de 20.300 millones en 1990.

La Red Técnica no adscrita al Ente Público Retevisión, creado en 1989, que corresponde a instalaciones de frecuencia no compartidas con centros emisores de TVE, S.A. pasó a gestionarse directamente por RNE, S.A. en 1990, por lo que las inversiones precisas para incorporar estos equipos supusieron un incremento del inmovilizado neto de Radio Nacional del 68%, aunque el incremento de dotaciones a la amortización sólo ha variado en un 5% en el mismo período.

IV.3.5.- ENTE PUBLICO DE LA RED TÉCNICA ESPAÑOLA DE TELEVISIÓN (RETEVISIÓN).

Retevisión es un Ente de Derecho Público de los previstos en el art. 6.1b) del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, creado por la Ley 37/1988, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1989. Constituye su objeto social la gestión y explotación de la red pública de telecomunicaciones, integrada por los sistemas de transporte y difusión de señales necesarios para prestar los servicios portadores de imágenes y sonido, soporte de los servicios de difusión de radio y televisión, y cuantas actividades sean complementarias de las anteriores para poder rentabilizar las inversiones realizadas. Las entidades, públicas o privadas, que utilicen la red satisfarán las correspondientes tarifas por la utilización del servicio, correspondiendo al Gobierno la autorización o modificación de las mismas. Para el cumplimiento de estas funciones, se adscribieron al patrimonio del Ente los bienes de dominio público que constituían la infraestructura de la red de telecomunicaciones procedente del patrimonio de RTVE, conservando la calificación de dominio público.

El Estatuto de RETEVISIÓN, aprobado por Real Decreto 545/1989, establece la necesidad de adecuar la gestión de la red pública de telecomunicaciones a las necesidades derivadas de la Ley de la Televisión Privada. El Real Decreto 1160/1989, de 22 de septiembre, que aprueba el Reglamento Técnico del Servicio Portador, atribuye a RETEVISIÓN la titularidad del monopolio del servicio portador del servicio de difusión de televisión. En consecuencia, es el organismo encargado, en régimen de exclusividad, de facilitar los medios de transporte y difusión de la señal de televisión a las empresas de televisión.

a) Las verificaciones llevadas a cabo en este Ente con relación a los procedimientos de gestión aplicados a la adquisición, registro, valoración, contabilización y control de los activos fijos, han puesto de manifiesto lo siguiente: Las deficiencias, fundamentalmente derivadas del traspaso de bienes, obligaciones y derechos desde el Ente Público RTVE a RETEVISIÓN en el momento de la constitución de éste, detectadas por la IGAE en su Informe de control financiero relativo al ejercicio 1990 sobre la Entidad y que afectaban significativamente a la fiabilidad de los estados financieros, condujeron a que aquélla denegara opinión sobre las cuentas correspondientes.

De acuerdo con el Convenio de fecha 24 de agosto de 1989 el valor del inmovilizado transferido debería ser validado por documentación soporte adecuada, a suministrar por RTVE, correspondiendo a RETEVISIÓN realizar un inventario físico de los bienes aludidos. En junio de 1990 la Subdirección Financiera de RTVE entregó un detalle de la adscripción de elementos del inmovilizado material por valor de 19.071 millones de pesetas, que no concuerdan ni en la cantidad total ni en los diversos apartados con los datos contables procedentes del traspaso realizado. La Dirección de RETEVISIÓN en 1991, al no considerar adecuada la documentación existente, contrató con una empresa de consultoría la realización de un proyecto de reconstrucción documental del inventario del activo fijo, trabajos que finalizaron, con relación a la reconstrucción del inventario a 31 de diciembre de 1990, en diciembre de 1991, prosiguiéndose para incluir posteriormente el del ejercicio 1991. En el momento de redactar este Informe la entidad está procediendo a realizar un inventario físico que permita ajustar las diferencias.

La única justificación soporte del inmovilizado material de RETEVISIÓN, referido a 31 de diciembre de 1990, es el inventario documental realizado, por encargo de RETEVISIÓN, por la firma de auditoría. El saldo total del citado inventario, excluido el inmovilizado en curso, es inferior en 1.442 millones de pesetas al saldo contable correspondiente. El importe pendiente de justificar supone el 5% del inmovilizado material registrado, sin incluir el inmovilizado en curso. Los importes que integran la amortización acumulada, a 31 de diciembre de 1990, según la reconstrucción realizada en el nuevo inventario documental, ascienden a 8.537 millones de pesetas. Sin embargo, las cuentas rendidas registran un valor de los fondos de amortización del inmovilizado material de 10.831 millones de pesetas. De acuerdo con el inventario documental señalado, el importe de la dotación a la amortización del inmovilizado material que debería haberse imputado al ejercicio 1990, asciende a 2.180 millones de pesetas, frente a los 2.286 millones que se dotaron. Hay que tener en cuenta, además, las limitaciones del soporte documental como instrumento en la identificación y control de activos.

El inventario descrito se encuentra materializado en una base de datos que pretende dar respuesta a un conjunto de información de identificación relativa al número de expediente de contratación del

que se deriva, centro en el que se encuentra destinado el bien, código vademecum de inmovilizado, marca, modelo, número de serie, valor de la adquisición y fecha de alta. Se ha constatado que el número del expediente de contratación y el valor de adquisición están reflejados en todos los casos, presentando los demás elementos de identificación de la base de datos las siguientes carencias: Inmovilizado material por valor de 1.453 millones de pesetas figura clasificado como asignado inicialmente a "centro desconocido", es decir, que los expedientes de contratación carecen de información sobre el destino inicial de dichos bienes. Destaca, asimismo, que el origen de estos bienes no procede exclusivamente de adquisiciones anteriores a la actual gestión, ya que, cinco de los bienes descritos, tienen fecha de alta posterior a 1 de octubre de 1989, acumulando un valor de 232 millones de pesetas. A pesar de lo manifestado en alegaciones, las verificaciones llevadas a cabo en el inventario documental en relación con los almacenes han puesto de manifiesto la existencia de código identificador concreto de los bienes en aquéllos depositados *. Se ha verificado, también, la ausencia, muy extendida, de la identificación del modelo y de la marca del bien inmovilizado, datos imprescindibles para realizar con éxito la comparación entre el inventario documental y los resultados del recuento físico. Realizado un muestreo entre los 18.750 elementos que integraban el inventario, se ha podido concluir que, de los muestreados, el 54% no incorporan la identificación del modelo, el 6%, la identificación de la marca y el 3%, la de la marca y el modelo, limitaciones, a pesar de lo manifestado el alegaciones, importantes en la conciliación entre el inventario documental y el físico, a las que hay que añadir las derivadas de la ausencia de normas para el traslado entre centros operativos.*

La fecha de alta de los bienes inmovilizados carecía, en 1990, de criterios normalizados, aplicándose, indistintamente, la deducida de la recepción provisional o la derivada de la entrada en servicio. Asimismo, no se disponía de normas por las que tramitar la retirada del servicio de aquellos elementos que sufrieran un grave deterioro y se carecía de la normativa interna y procedimientos de gestión necesarios para el control de los cambios de ubicación entre los diferentes centros. Hay que destacar que las alegaciones formuladas en este sentido, hacen referencia al proceso configurado en las normas sobre gestión del activo fijo de 1992.*

RETEVISIÓN mantiene distribuidos por todo el territorio nacional una serie de centros que forman la red de difusión primaria (emisores) y secundaria (reemisores). Su puesta en marcha requiere la utilización de terrenos e infraestructura (torres, vallado, caminos, líneas de tensión, entre otros), que, en ocasiones, pertenecen a RETEVISIÓN por proceder de adquisiciones y donaciones y, en la mayoría de los casos, se integran en la red a través de convenios de cesión realizados con entidades autonómicas, locales o particulares. La mayor parte de los centros de RETEVISIÓN proceden de la subrogación de los concertados por RTVE entre los ejercicios 1980 y 1989. Se ha verificado que no se encuentran registrados ni valorados, contablemente, los derechos de uso de los bienes de infraestructura utilizados por el Ente provenientes de las citadas cesiones.*

b) En cuanto a los procedimientos aplicados por RETEVISIÓN a la facturación por el servicio de transporte para difusión a las tres sociedades concesionarias del servicio público de televisión en gestión indirecta, hay que señalar, en primer lugar, que la Entidad ha prestado este servicio en 1990 a través de un satélite, al carecer de una red de radioenlaces terrestres adecuada, utilizando para ello las instalaciones del sector terreno de Telefónica y el satélite EUTELSAT, de las Organizaciones Internacionales de satélites, de las que Telefónica es signataria.

Como ya se ha señalado, las entidades públicas o privadas que utilicen la red del Ente han de satisfacer las correspondientes tarifas. El Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 1989 aprobó las tarifas de difusión y transporte de televisión y radiodifusión sonora, estableciendo que las tarifas aprobadas que no cubran los gastos derivados de la prestación del servicio por parte de RETEVISIÓN, bien porque sea preciso utilizar medios ajenos a la propia red o bien porque se utilicen medios no tipificados en el Acuerdo, deberán ser complementados con nueva facturación a los usuarios de conformidad con lo que se establece en los correspondientes contratos suscritos en le marco del derecho privado.

En la cláusula novena de los contratos firmados el 2 de octubre de 1989 entre RETEVISIÓN y cada una de las tres sociedades privadas de televisión se señala que en los servicios en que fuera necesaria la utilización de medios ajenos a la red de RETEVISIÓN, el Ente público repercutirá al concesionario el importe facturado por terceros. En el artículo 13 de la Ley de la Televisión Privada, de 3 de mayo de 1988, se indica que los gastos derivados de la contratación, y en su caso, de la explotación, mantenimiento y reposición de los sistemas de transporte y difusión de señales previstos para el funcionamiento de la televisión privada, se abonarán por las sociedades concesionarias, según tarifas cuya autorización o modificación corresponderá al Gobierno, y la cláusula 14 del pliego de bases del concurso para la adjudicación establece que las concesionarias vendrán obligadas al pago a la Entidad Pública encargada de la explotación de la red de transporte y difusión de señales, de la cantidad resultante de las tarifas que a dichos efectos se aprueban por el Gobierno y que cubran los gastos de contratación, explotación, mantenimiento y reposición de dicha red.

El coste para RETEVISIÓN repercutido por Telefónica, ascendió en 1990 a 1.559 millones de pesetas. RETEVISIÓN facturó, en dicho ejercicio, a las tres concesionarias privadas, 664 millones de pesetas en concepto de transporte para difusión, fundamentando la menor facturación en una interpretación del pliego de bases del concurso de adjudicación, según la cual no cabría otra posibilidad sin incurrir en quebranto de los previstos principios de "equilibrio financiero" de las concesionarias y de "igualdad de trato" de todos los usuarios, ya que, las Televisiones Públicas, a las que se les suministró el servicio por vía terrena, quedarían favorecidas con respecto a aquéllas.

Al respecto se considera que no existe "a priori" colisión alguna entre los principios de "igualdad de trato", "equilibrio financiero" y "repercusión del coste" citados y que la solución adoptada, fundamentada únicamente en criterios interpretativos y sin haber mediado propuesta alguna al Gobierno sobre la aplicación de tarifas para el periodo provisional de uso del satélite ante la insuficiencia de la red terrestre, no ha contado con la instrumentación jurídica adecuada y ha resultado para el Ente la más ineficiente de las posibles. Concluido el examen y comprobación de las cuentas correspondientes, fueron individualizadas las conclusiones de fiscalización, relativas a este punto, y trasladadas a la consideración del Fiscal y del Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal que, en sendos escritos de 3 y 16 de mayo de 1993 solicitaron la formación de pieza separada. Dicha pieza, una vez ultimada, se ha remitido a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.*

c) Han sido también objeto de verificación las facturaciones por circuitos ocasionales a T.V.E., S.A.: El Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 1989 define el circuito ocasional regular como aquél cuya cadencia, horas de comienzo y finalización, origen y destino, se pactan previamente a su establecimiento por período de tiempo definido. Su cuantificación se realiza mediante la fórmula de cálculo de los circuitos ocasionales (tiempo, kilómetros, factor de utilización...), pudiendo aplicar una reducción no superior al 10%. Los circuitos permanentes son circuitos solicitados a petición del usuario, con origen y destino definidos, sin operación y al servicio del usuario las 24 horas del día. Se puede calcular, de forma aproximada, que el coste de utilización del circuito ocasional regular en un mes, equivaldría al del circuito permanente en un año.

En el contrato de 6 de febrero de 1989, de prestación de servicio entre RETEVISIÓN y TVE, S.A. se definen, en el anexo II, los circuitos ocasionales y permanentes que se ponen a disposición de ésta, y en el apartado 2.4 del anexo III se establece que "en los supuestos de utilización de circuitos ocasionales de la red existentes a la fecha de la firma del presente anexo y, dada la limitación de disponibilidad de circuitos permanentes puestos a disposición de TVE, S.A en el anexo II, RETEVISIÓN se compromete a que la facturación correspondiente a la utilización de cada uno de estos circuitos ocasionales, no supere en el período de facturación el coste equivalente a un circuito permanente".

Se ha comprobado que TVE, S.A. dispone de un auténtico circuito ocasional regular, durante una determinada franja horaria (y no permanente, como se manifiesta en alegaciones, puesto que no está a su servicio las 24 horas del día). En el tiempo restante, RETEVISIÓN puede prestar circuitos ocasionales a otros clientes. RETEVISIÓN ha facturado a TVE, S.A., por la prestación de un servicio de circuito ocasional regular, al precio, muy inferior, de la de circuito permanente. Este proceder, respaldado en esta ocasión por el contrato, no es acorde con la previsión de distintos tipos de tarifas realizada al respecto por el Consejo de Ministros, y podría vulnerar el proclamado principio del "igualdad de trato" frente a los intereses de otros usuarios.

d) En las verificaciones de la facturación de RETEVISIÓN se ha constatado, por otra parte, que, tratándose de circuitos ocasionales, cuando el tiempo de utilización es inferior a cinco minutos, no siempre se ha facturado el tiempo mínimo establecido en cinco minutos, sino que se ha realizado en tiempo real.

Respecto a los circuitos de distribución hay que destacar la existencia de tres facturas correspondientes a 1990, emitidas en noviembre de 1992, pendientes de contabilización y cobro en el momento de llevar a cabo las verificaciones, por un valor, cada una, de 13.931.720 pesetas.

Se ha verificado, asimismo, la incorrecta contabilización de los ingresos por prestación de servicios durante 1990, ejercicio en el que se ha cambiado en varias ocasiones el criterio de imputación a las distintas subcuentas. Así, al menos 1.329 millones de pesetas imputados a la subcuenta "ingresos por prestación de servicios de difusión", corresponden a la prestación de servicios de distribución. Del mismo modo, ingresos procedentes de la facturación de circuitos permanentes, por valor de 1.217 millones, se han registrado como ingresos por servicios de difusión. Todo ello, a pesar de lo manifestado en alegaciones, ocasiona dificultad en la diferenciación de los ingresos en función de su tipología.*

Analizado, con relación a 1990, el procedimiento de gestión para el control de las cuentas pendientes de cobro se ha comprobado, en primer lugar, que RETEVISIÓN no ha repercutido, a ninguno de sus clientes el interés de demora previsto en los correspondientes contratos de prestación de servicios, a pesar de que una parte importante de los 10.044 millones de pesetas, pendientes de cobro, tenía antigüedad suficiente para exigirlo. Baste citar los 4.346 millones de pesetas que TVE, S.A. tenía en situación de mora, a 31 de diciembre de 1990.

Hay que destacar, por otra parte, que RETEVISIÓN ha provisionado parte de la deuda que TVE, S.A. y RNE, S.A. mantenían por servicios prestados en 1989 y 1990.

El 24 de agosto de 1989 se suscribió un convenio entre RETEVISIÓN y RTVE según el cual, hasta tanto no se aprobara por el Gobierno las tarifas, RTVE se comprometía a abonar una cantidad equivalente a los gastos de explotación de las unidades de la Dirección Técnica de RTVE que se transfirieran. Aunque las tarifas se aprobaron el 29 de septiembre de 1989, RTVE siguió abonando las cantidades originarias del convenio hasta el 6 de febrero de 1990,

acumulándose una deuda, no reconocida por RTVE, de 1992 millones, importe que ha sido provisionado por RETEVISIÓN, junto con 550 millones de pesetas procedentes de RNE, S.A.

e) El Ente RETEVISIÓN participa en el 25% del capital social de HISPASAT, S.A., constituida el 30 de junio de 1989, junto con Telefónica de España, S.A. (25%), Caja Postal de Ahorros (22,5%), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (15%), Instituto Nacional de Industria (10%) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (2,5%).

El objeto social de esta empresa consiste en la explotación del sistema de comunicación por satélite HISPASAT-1, la de los sistemas de comunicación por satélite que le encomiende el Gobierno para su prestación a los entes y sociedades titulares de servicios de telecomunicación, y cuantas actividades sean anejas o complementarias de las anteriores que permitan rentabilizar las inversiones realizadas.

Desde la fecha de constitución de la sociedad se están llevando a cabo las operaciones de puesta en marcha que incluyen la construcción de los elementos del sistema de satélites HISPASAT-1, que se estima iniciará su fase de explotación comercial en 1993. Durante 1990, el desarrollo del programa HISPASAT se ha concretado, respecto al "segmento espacial", formado por el satélite y el lanzador, en la suscripción de diversos contratos, entre los que destacan el firmado con una empresa líder del consorcio internacional SATCOM, -en el que participa también la industria española realizando más del 30% del sistema-, contrato que integra dos satélites en órbita y uno en tierra de reserva, por un importe de 27.000 millones de pesetas, y el suscrito con ARIANESPACE para que "Ariane 4" fuese el lanzador de los dos satélites, con un importe próximo a los 18.000 millones de pesetas. En relación al "segmento terreno", en el ejercicio se terminaron los estudios previos para la selección del emplazamiento del centro de control y seguimiento del sistema "HISPASAT-1" en Arganda del Rey, y se adjudicó el proyecto de obra civil.

Respecto a la explotación del sistema, la Dirección que realizará esta actividad comenzó sus actividades el 1 de septiembre de 1990, iniciando la promoción de los servicios y aplicaciones de telecomunicación, sin que en el momento de redactar este Informe se hubiera procedido a contratar la reserva de transpondedores. Esta actividad de explotación se encontraba con la importante limitación de la falta de normativa reguladora del régimen jurídico aplicable a la modalidad del servicio de difusión y televisión mediante satélite. Aún estaban pendientes, en la fecha de realización de las verificaciones, las normas jurídicas de regulación de la Televisión por cable y de la Televisión por satélite, (la Ley de la Televisión por satélite fue aprobada el 22 de diciembre de 1992 y el satélite HISPASAT-1 se lanzó en septiembre de 1992). La falta de regulación ha impedido que el sector pueda adoptar la decisión de prepararse para solicitar una concesión de gestión indirecta del servicio y, por lo tanto, ha condicionado cualquier proyección de viabilidad económica del Proyecto HISPASAT. La falta de inicio de la actividad de explotación, se refleja en las cuentas anuales de la Entidad:

El capital social, 20.000 millones de pesetas, desembolsado en el 50%, a 31 de diciembre de 1990, se encontraba materializado, fundamentalmente, en inmovilizaciones materiales en curso y en inversiones financieras temporales. El inmovilizado material en curso, cuyo saldo a final de ejercicio ascendía a 8.963 millones, se integra por "costrucción del satélite", 5.677 millones de pesetas, "construcción del lanzador", 2.829 millones de pesetas, "otras partidas del sistema", 316 millones, y "edificios y otras construcciones en curso", 141 millones. El resto del inmovilizado está registrado por 91 millones de pesetas. Las inversiones financieras temporales se materializaron en Deuda del Estado, por un nominal de 1.007,5 millones de pesetas, generándose 304 millones de pesetas de ingresos por intereses.

El grado de avance del Proyecto, en función de los contratos y gastos devengados podía estimarse, al finalizar 1990, en el 21% para el satélite y en el 16% para el lanzador, alcanzando los gastos devengados los importes de 5.677 y 2.829 millones de pesetas, respectivamente.

IV.3.6.- COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

El Pleno del Tribunal ha acordado, en el ámbito del programa de actuaciones del Tribunal para 1993, fiscalizar la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La Comisión creada por Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, fue configurada como un Ente de derecho público, de los previstos en el apartado 5 del art. 6º de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, pública y privada, que se regirá por lo dispuesto en la citada Ley y las disposiciones que la desarrollen. En el ejercicio de sus funciones públicas y en defecto de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y en las disposiciones que la desarrollen, la Comisión actuará con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo. En sus adquisiciones patrimoniales y contratación está sujeta al derecho privado.

Las funciones encomendadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la citada Ley son, fundamentalmente, supervisar e inspeccionar los mercados de valores y la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionen en el tráfico de los mismos, controlar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos exigidos en la normativa sobre los mercados de valores y sancionar los comportamientos irregulares tipificados en la misma.

La Ley del Mercado de Valores estableció el patrimonio inicial de la Comisión señalando una dotación inicial de 500 millones de pesetas y señaló que sus recursos estarían integrados por los bienes y valores que constituyen su patrimonio y rentas, las tasas que perciba por la realización de sus actividades y las transferencias que, con cargo al Presupuesto del Estado, efectúe el Ministerio de Economía y Hacienda.

En cuanto a las tasas a las que se refiere la Ley, existen tres tipos de tarifas, correspondientes al Registro de folletos, ofertas públicas de adquisición o venta de valores e inscripción y permanencia en los registros administrativos de las Sociedades y Agencias de valores, Instituciones de inversión colectiva y Entidades gestoras de estas Instituciones y Sociedades gestoras de carteras.

En el ejercicio 1990, la Comisión refleja en su cuenta de pérdidas y ganancias, el incremento del importe global de ingresos, 1.925 millones, que ha supuesto el 214% respecto a los ingresos del ejercicio anterior.

Este crecimiento de los ingresos ha sido determinante en el aumento del beneficio del ejercicio, que alcanzó 1.384 millones, con un incremento del 847% con relación al del ejercicio anterior. El aumento del resultado se ha materializado en inversiones financieras temporales por valor de 1.574 millones de pesetas, frente a 502 millones del ejercicio anterior. Este epígrafe del balance está integrado, básicamente, por la inversión en bonos del Estado y letras del Tesoro.

Aunque las transferencias con cargo a los Presupuestos del Estado, a las que se refiere el art. 24 de la Ley del Mercado de Valores, ascienden en el presupuesto de explotación de la Entidad a 1.123 millones de pesetas, la subvención realmente percibida se ha elevado a 648 millones, lo que ha representado el 23% de los ingresos totales.

Los ingresos de la Comisión han superado los gastos realizados, a pesar de que en concepto de gastos de personal y de otros gastos de explotación el crecimiento experimentado en 1990, ejercicio en que la Entidad puede considerarse desarrollada, en relación a 1989, fue del 90% y del 96%, respectivamente, de modo que, aunque la Comisión no hubiera recibido las subvenciones de explotación en el ejercicio, seguiría obteniendo unos beneficios de 735 millones de pesetas, lo que pone de manifiesto la saneada situación de la Entidad en 1990, que le permitía hacer frente a su actividad con sus propios recursos.*

V.-LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

V.1 CONSIDERACIONES PREVIAS . . . . . .
V.1.1. Remisión de los contratos al Tribunal . . . . . .
V.1.2. Criterios de selección de los contratos examinados . . . . . .
V.1.3. Características generales de los contratos examinados . . . . . .

V.2 CONTRATOS DE OBRAS . . . . . .
V.2.1. Contratos de obras celebrados mediante concurrencia general
V.2.2. Contratos de obras adjudicados directamente . . . . . .

V.3. CONTRATOS DE SUMINISTRO . . . . . .
V.3.1. Contratos de suministros adjudicados mediante concurso . . . . . .
V.3.2. Contratos de suministros adjudicados directamente . . . . . .

V.4. CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA . . . . . .
V.4.1. Contratos de asistencia técnica adjudicados por concurso . . . . .
V.4.2. Contratos de asistencia técnica adjudicados directamente . . . . .

V.-LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

V.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

En cumplimiento de lo establecido por el art. 6 de la Ley de Contratos del Estado, que dispone la remisión al Tribunal para su examen y toma de razón de los contratos celebrados por los distintos Centros y Organismos de la Administración cuyo importe inicial exceda de veinticinco millones de pesetas, se han recibido en este Tribunal 2.695 contratos celebrados en el ejercicio de 1990, por un importe global de 1.120.997 millones de pesetas, de los cuales con amparo en el artículo 11.a de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, se han examinado 1.467 por un importe de 1.024.357 millones.

El desglose de los contratos examinados es el siguiente[1]:

DEPARTAMENTO MINISTERIAL	CONTRATOS RECIBIDOS Núm.	CONTRATOS RECIBIDOS Importe (mill.)	CONTRATOS EXAMINADOS Núm.	CONTRATOS EXAMINADOS Importe (mill.)
Administraciones Públicas	14	523	8	249
Agricultura, Pesca y Alimentación	72	10.062	46	7.198
Asuntos Exteriores	14	5.854	12	5.529
Asuntos Sociales	5	816	5	816
Cultura	57	8.967	47	8.439
Defensa	730	242.973	402	210.506
Economía y Hacienda	187	29.893	101	25.478
Educación y Ciencia	377	50.618	103	30.035
Industria y Energía	3	370	3	370
Interior	203	41.586	115	33.895
Justicia	78	11.966	78	11.966
Obras Públicas y Urbanismo	617	612.863	368	595.121
Relac.Cortes y Secret.Gobierno	24	7.027	23	6.948
Sanidad y Consumo	28	2.397	16	1.879
Trabajo y Seguridad Social	52	5.332	18	3.650
Transportes,Turismo y Comunicaciones	234	89.750	122	82.278

Resulta, así, haber sido examinado el 54,44% de los contratos recibidos; significando el importe fiscalizado el 91,38% de la cuantía total de éstos contratos, por haberse seleccionado -con los criterios que se expondrán en el apartado V.1.2.- los contratos más importantes.

Por otra parte, además de los indicados contratos correspondientes al ejercicio de 1990, se han examinado otros muchos celebrados en ejercicios anteriores, relacionados con aquéllos, y otros relativos a modificaciones o a obras complementarias producidas en ejercicios posteriores. Por el contrario, respecto del Ministerio de Justicia, se han examinado veintitrés contratos celebrados en el año 1989 y formalizados en 1990, que fueron remitidos junto con los de este ejercicio, ya que en dicho Departamento el criterio de atribución temporal se establece en función la fecha de formalización y no según la fecha de perfección del contrato.

V.1.1.- REMISIÓN DE LOS CONTRATOS AL TRIBUNAL

Con relación al envío de estos contratos -que, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 6,42 y 111 de la Ley de Contratos del Estado, debe hacerse en el plazo de tres meses desde su formalización a través de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa-, debe llamarse la atención sobre el retraso con el que se ha producido la entrada de dichos contratos en el Tribunal, ya que el tiempo medio transcurrido desde su formalización hasta su recepción ha sido de 10,86 meses.

Por otra parte, debe también llamarse la atención sobre el hecho de que en ocasiones la remisión de los contratos haya sido debida a peticiones del Tribunal, ya genéricas (como las que se contienen en las reclamaciones de relaciones de contratos celebrados en el ejercicio a las que después se hará referencia más ampliamente), ya específicas como las producidas cuando, tras el estudio de dichas relaciones, se detectan casos de contratos que, seleccionados para su examen, no habían sido todavía remitidos al Tribunal.

Por todo ello, se estima conveniente que la Administración por sus Centros y Organismos contratantes, cumpla con la máxima diligencia la obligación de envío de los contratos a este Tribunal en el tiempo establecido por el art. 6 de la Ley de Contratos del Estado y disposiciones complementarias.

V.1.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS

Al igual que en los ejercicios anteriores, la documentación básica para la realización de esta fiscalización ha consistido en las relaciones remitidas por los distintos Departamentos, Centros y Organismos de la Administración, acreditativas de los contratos por ellos celebrados durante el ejercicio que se considera. Estas relaciones, aun con las lógicas prevenciones que se derivan de los hechos de haberse formado por los propios organismos contratantes y de no venir certificadas en su mayoría en cuanto a la integridad de su contenido, han servido, de una parte, para determinar los criterios de selección de los contratos que habían de ser examinados, y de otra, para reclamar la remisión de los contratos seleccionados que no hubieran sido aún enviados al Tribunal, siempre que así lo exigiera su número e importancia.

De esta manera, se programó la fiscalización dando preferencia al examen de los contratos en los que concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

- Contratos de obras celebrados mediante subasta o concurso públicos de importe superior a doscientos millones de pesetas, o adjudicados directamente cuya cuantía sobrepasara los sesenta millones de pesetas.

- Contratos de suministros celebrados mediante concurso cuyo importe excediera de cien millones de pesetas, o adjudicados directamente por importe superior a treinta millones de pesetas.

- Otros contratos administrativos, singularmente de asistencia técnica con empresas consultoras o de servicios, celebrados por concurso de importe superior a ochenta millones de pesetas, o adjudicados directamente por cuantías superiores a treinta millones de pesetas.

Esto no obstante, y al igual que en ejercicios anteriores, en el transcurso de la fiscalización se rebajaron los límites establecidos para los sistemas de adjudicación con concurrencia general en algunos Departamentos, con objeto de conseguir un número de contratos suficientemente representativo, y en todo caso los establecidos para las adjudicaciones directas -concretamente hasta los veinte millones de pesetas- en los supuestos en los que se detectaron indicios de haberse podido producir fraccionamientos de un objeto total en varios contratos parciales. Por el contrario, ante el gran número de contratos celebrados, se elevaron los indicados importes en el Ministerio de Obras Públicas a 500 millones de pesetas para los contratos de obras celebrados por subasta o concurso, y en el Ministerio de Defensa a 300 y a 100 millones de pesetas para los suministros adjudicados respectivamente por concurso o por contratación directa.

Desde otro punto de vista, al programarse la fiscalización se previó la consideración de la ejecución de los contratos de importe superior a 300 millones de pesetas -cuantía elevada a 800 millones respecto de los contratos de obras celebrados por el Ministerio de Obras Públicas y a 500 millones respecto de los suministros acordados por el de Defensa-. No obstante, la práctica ha puesto de manifiesto que precisamente los contratos de elevado importe conllevan normalmente un dilatado período de ejecución, produciéndose también en ellos distintas alteraciones -como prórrogas, proyectos de reforma o por obras complementarias-, por lo que su ejecución no suele estar concluida en el momento de su fiscalización, no pudiéndose en consecuencia emitir un juicio definitivo sobre la misma. Ello ha llevado a considerar, en el primero de los Departamentos citados, la ejecución de contratos celebrados en ejercicios anteriores -1984, 1985 y 1986- que hubieran sufrido incidencias en el año objeto del presente Informe (1990), con los resultados que se expondrán en su lugar oportuno.

V.1.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS

A consecuencia de la aplicación de los criterios expresados en el punto anterior, de los 2.695 contratos recibidos se han examinado 1.467 con la siguiente distribución según su distinta naturaleza y con el significado porcentual que se señala:

CONTRATOS	OBRAS	SUMINISTROS	OTROS	TOTAL
Recibidos	1.304	816	575	2.695
Examinados	741	412	314	1.467
Porcentaje de la muestra	56,83	50,49	54,60	54,44

Por lo demás, y en cuanto a las características generales de los contratos examinados, del análisis de los datos contenidos en los Anexos V.1 y 2, se desprenden las siguientes consideraciones:

a) Por su respectiva naturaleza destacan, al igual que en ejercicios anteriores, los contratos de obras sobre bienes inmuebles, de los que se han examinado setecientos cuarenta y un contratos por un importe global de 753.265 millones de pesetas,lo que viene a suponer la mitad de los contratos considerados y el 73,54% de la inversión fiscalizada.

A dichos contratos de obras les siguen los de suministro, relativos principalmente a la adquisición o fabricación de bienes muebles, de los que se han examinado cuatrocientos doce contratos por 187.055 millones de pesetas, que significan aproximadamente la tercera parte de su total y el 18,26% de su importe, encontrándose ya a mayor distancia el resto de los contratos administrativos, fundamentalmente los de asistencia técnica con empresas consultoras o de servicios, de los que se han examinado trescientos catorce contratos por 84.037 millones de pesetas, que constituyen casi la cuarta parte de los contratos considerados y el 8,20% de su importe.

b) En cuanto al sistema de contratación utilizado, ha sido el de adjudicación directa el empleado en mayor número de ocasiones en los contratos examinados, con ochocientos noventa y ocho

[1] Las citas a los distintos Departamentos, Centros y Organismos se refieren a la organización ministerial vigente en el año considerado en el Informe, 1990.

contratos por un importe global de 275.933 millones de pesetas, lo que supone casi las dos terceras partes de los analizados que representan el 26,94% de su importe. Ello se explica, no sólo por el normalmente reducido precio de los contratos adjudicados por este sistema, sino también por el hecho de haberse rebajado respecto de ellos los criterios de selección para su fiscalización, según se señaló anteriormente.

Por la importancia del gasto adjudicado destacan los celebrados mediante concurso público, que en los contratos examinados han supuesto una inversión global de 698.112 millones de pesetas a través de cuatrocientos setenta y nueve contratos, lo que significa el 68,15% del importe fiscalizado y la tercera parte de los contratos considerados, circunstancia que se debe al hecho de ser este sistema el normalmente aplicado en la adjudicación de los más elevados contratos de obras públicas y, además, el general para el resto de los contratos administrativos .

En un último lugar, tanto por el número de contratos como por su cuantía dentro de los examinados, se encuentra el sistema de subasta, con noventa contratos por 50.312 millones de pesetas, lo que representa el 6,13% de los objeto de examen y el 4,91% de su importe.

c) Por lo que se refiere a los Departamentos contratantes, el mayor número de los contratos examinados procede del Ministerio de Defensa, con cuatrocientos dos contratos por un importe de 210.506 millones de pesetas. Generalmente se trata de contratos de suministro y de asistencia técnica, habiéndose adjudicado en su gran mayoría por contratación directa, dada la especificidad de gran parte del material militar, que hace que sólo exista un único fabricante, y reservándose el concurso para los supuestos, especialmente en las adquisiciones de vestuario, en los que existen varios proveedores.

Por el volumen del gasto destaca el Ministerio de Obras Públicas, con 595.121 millones de pesetas canalizados a través de trescientos sesenta y ocho contratos que se refieren a obras en su inmensa mayoría, prevaleciendo el concurso como forma de adjudicación, especialmente para las obras de gran importancia, si bien este Ministerio es el que ha utilizado la subasta en mayor número de ocasiones para los contratos de pequeña y mediana cuantía.

A cierta distancia de los Departamentos anteriores se encuentran los de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de Educación y Ciencia y de Economía y Hacienda, con ciento veintidós, ciento tres y ciento un contratos por importes respectivos de 82.278, 30.035 y 25.478 millones de pesetas, con predominio del contrato de obras en los dos primeros y con una fuerte presencia del de asistencia técnica en el tercero, derivada de las numerosas e importantes campañas publicitarias desarrolladas por algunos de sus Centros y Organismos. En cuanto a los sistemas de contratación, también en los dos Departamentos primeramente citados prevalece el sistema de concurso, mientras que el de Economía y Hacienda utiliza con mayor frecuencia la adjudicación directa, generalmente por razones de urgencia.

Se pasa a continuación a comentar los resultados obtenidos en esta fiscalización, ordenando las observaciones formuladas según la distinta naturaleza de los contratos examinados, a los cuales se refiere el presente informe.

V.2.- CONTRATOS DE OBRAS

Los contratos de obras constituyen el bloque más importante de los examinados en el ejercicio que se considera en el presente Informe, ya que -según se indicaba en el epígrafe anterior- vienen a significar prácticamente la mitad de los contratos analizados, comprendiendo el 73,54% del importe de la inversión total fiscalizada. En el cuadro anexo V.3 se recoge la expresión numérica de estos contratos, así como su distribución entre los Departamentos contratantes y según los distintos sistemas de contratación mediante los que fueron adjudicados.

V.2.1.- CONTRATOS DE OBRAS CELEBRADOS MEDIANTE CONCURRENCIA GENERAL

En cuanto al sistema de adjudicación de estos contratos, en el ejercicio considerado se ha producido una importante novedad. Así, durante el primer semestre del mismo continuó siendo la subasta el sistema general para la contratación de las obras públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley de Contratos del Estado, reservándose excepcionalmente el concurso para los supuestos enumerados por el art. 35 de dicha Ley, -según la anterior redacción de ambos preceptos-. Pero, la Ley de Presupuestos para el ejercicio, de 29 de Junio de 1990, modificó estos artículos para equiparar, en el primero, a ambos sistemas en cuanto a su aplicación, y para generalizar, en el segundo, el empleo del concurso respecto de aquellos contratos en los que "la selección del contratista no se efectúe exclusivamente en atención a la oferta económicamente más ventajosa".

A consecuencia de ello, en el examen de los contratos de obras celebrados en el repetido ejercicio se ha observado un considerable aumento de los adjudicados mediante concurso, que pasan de ciento ochenta y tres examinados en 1989 (representando una cuarta parte de los considerados de aquella naturaleza), a doscientos cincuenta y tres en 1990 (significando la tercera parte de los examinados). Asimismo se aprecia una correlativa disminución de los contratos adjudicados mediante subasta, que descienden de ciento cuarenta y seis en 1989, constitutivos de la quinta parte de los examinados, a noventa en 1990, representativos de la octava parte de los mismos.

Esto no obstante, desde un punto de vista de la economía en la ejecución del gasto público, debe señalarse que el sistema de subasta ofrece grandes porcentajes de baja -como resulta de los datos contenidos en el apartado siguiente- y una total objetividad en la adjudicación, pudiéndose realizar también en este sistema, a través de los requisitos de admisión previa y de los mecanismos de clasificación de los contratistas, una cierta depuración de la capacidad de los mismos y de las condiciones técnicas de sus ofertas.

V.2.1.1.- Contratos de obras adjudicados mediante subasta

De acuerdo con las cifras consignadas en el Anexo V.3, se han examinado noventa contratos de obras adjudicadas por este sistema en el ejercicio considerado, por un importe conjunto de 50.312 millones de pesetas, significativos de la octava parte de los de esta naturaleza que han sido considerados y del 6,68% de su cuantía total.

Este sistema fue empleado principalmente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en especial por sus Direcciones Generales de Carreteras, Obras Hidráulicas y Puertos, que lo utilizaron en setenta y cuatro contratos relativos a obras con cuantías individuales que oscilaban entre 200 y 700 millones de pesetas, si bien en ocasiones se superaron los 1.000 millones. Con menor frecuencia, ha sido también aplicado por la Dirección General de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, en cinco contratos relativos a obras en edificios destinados a servicios fiscales y cuyo importe particular oscilaba alrededor de 200 millones de pesetas, aunque se alcanzaron los 774 millones en el referente a la nueva sede del Instituto de Estudios Fiscales; y también fue utilizado por la Secretaría General de Turismo, en otros cinco contratos relativos a Paradores Nacionales con importes comprendidos entre 300 y 600 millones de pesetas. Y, con carácter esporádico acudieron en dos ocasiones a este sistema las Direcciones Generales de Servicios de los Ministerios de Justicia, en contratos por importes de 237 y 764 millones de pesetas, y de Trabajo, en contratos de 27 y 1.079 millones de pesetas.

Por el contrario, no se han detectado en el examen contratos adjudicados por subasta en los distintos Centros y Organismos del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones -con la indicada excepción de su Secretaría General de Turismo- ni en la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, del Ministerio de Educación y Ciencia, que adjudicaron normalmente sus obras mediante concurso. En menor escala, tampoco se ha utilizado este sistema por los Ministerios de Interior, Cultura, Relaciones con las Cortes y Asuntos Exteriores, así como por la Dirección General de Patrimonio del Estado, del de Economía y Hacienda, que adjudicaron normalmente sus obras por contratación directa.

En cuanto a los resultados de este sistema, destacan las grandes bajas que se han obtenido en las adjudicaciones realizadas por el mismo. Así, en los contratos examinados la mayor parte de las bajas han oscilado entre el 20% y el 35% en las Direcciones Generales de Carreteras y de Obras Hidráulicas, entre el 5% y el 20% en la Dirección General de Puertos, entre el 25% al 33% en la Secretaría General de Turismo y de forma escalonada entre el 1,20% y el 25,02% en la Dirección General de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. En los Departamentos en los que se acudió al sistema de subasta de forma esporádica se obtuvieron bajas del 5,3% y 4,3% por el Ministerio de Justicia, del 0 y 6,9% en el de Trabajo, y del 19,3% en el Consejo Superior de Deportes.

Desde otro punto de vista, en la mitad de los contratos adjudicados por este sistema las ofertas más económicas de las presentadas incurrieron en baja temeraria o desproporcionada, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 109 del Reglamento de Contratación. De dichos casos, en veinticinco ocasiones la adjudicación definitiva recayó en favor de dichas ofertas más económicas, una vez explicadas por el licitador las razones de su baja, mientras que en las dieciocho ocasiones restantes se produjo la adjudicación en favor de la siguiente oferta más económica no incursa en temeridad, pero sin que en las mismas se justificase la adjudicación ante el Comité consultivo para los contratos públicos de la C.E.E., dispuesta por el último párrafo del citado art. 109 del Reglamento General de Contratación.

En cuanto a la ejecución de estos contratos,ya se dijo que, como regla general, se ha comprobado la relativa a los contratos de importe superior a 300 millones de pesetas, observándose que en más de la mitad de los casos considerados se produjeron proyectos reformados que en la mayoría de las veces supusieron incrementos que rozan el 20% del presupuesto primitivo. Por lo demás, en la mayor parte de ellos se justificó su ejecución dentro del plazo inicial o de sus prórrogas, continuando la ejecución del resto dentro del plazo. Mención especial merece el contrato relativo a la "Construcción de nuevo edificio de Juzgados de Toledo", adjudicado por la Dirección General de Servicios del Ministerio de Justicia en 27 de Diciembre de 1989 por 237.344.698 ptas, cuya iniciación fue suspendida por falta de licencias, estando en trámite su resolución con devolución de la fianza y pago de una indemnización al contratista del 3% de su presupuesto, así como el referente al "Nuevo edificio de Juzgados de Gerona", adjudicado por el mismo Centro y en la misma fecha por 764.212.715 ptas, que fue objeto de un reformado constitutivo de un incremento del 19,99% -reformado cuya realización se certifica en un mes, a pesar de su elevada cuantía y de un proyecto por obras complementarias, basado en iguales motivos que el anterior pero adjudicado como contrato independiente, previa consulta a tres empresas y resultando el mismo contratista, que supuso un nuevo incremento del 50,11%, estando concluidas las obras del primitivo y de su reformado en el momento de su fiscalización, y a la espera de la terminación

del complementario para su recepción conjunta -sin que las alegaciones justifiquen su carácter de proyecto independiente, reforzando su condición de reformado, por lo que el conjunto de ambos supuso un incremento del 70,10% respecto del presupuesto primitivo-.*

En cuanto a los contratos celebrados por el Ministerio de Obras Públicas, resulta que,por su normalmente dilatado plazo de ejecución, de los dieciséis contratos seleccionados tan sólo en dos había vencido dicho plazo, de los cuales uno había ya concluido,continuando el otro con retraso. Esta falta de datos sobre la ejecución de los contratos celebrados en el ejercicio considerado ha llevado a analizar la de los contratos celebrados en ejercicios anteriores que habían tenido complementarios en el año objeto del presente Informe, con los resultados que se expondrán en el apartado V.2.1.3.

V.2.1.2.- Contratos de obras adjudicados mediante concurso

De acuerdo con las cifras consignadas en el Anexo V.3, se han examinado doscientos cincuenta y tres contratos de obras adjudicados por este sistema en el ejercicio considerado, por un importe conjunto de 627.630 millones de pesetas, que vienen a significar la tercera parte de los mismos y el 83,33% de su cuantía total.

Estas magnitudes expresan suficientemente la primacía de este sistema, no sólo en cuanto al número de contratos celebrados mediante el mismo sino también, y sobre todo, respecto de la importancia económica de los adjudicados por este procedimiento.

De esta forma, además del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que ha empleado el concurso en ciento quince contratos de los examinados, por un importe global de 513.901 millones de pesetas, se encuentran los de Educación y Ciencia y de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con setenta y cuatro y cuarenta y cinco contratos respectivamente, por importes de 24.342 y 68.432 millones de pesetas; y a mayor distancia los de Interior, Cultura y Justicia, con cuatro, ocho y un contratos respectivamente, por importes de 10.737, 3.199 y 4.695 millones de pesetas.

Por otra parte, conviene observar que, mientras que la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ha aplicado normalmente este sistema a contratos de importes individuales superiores a 1.000 millones de pesetas, sobrepasándose incluso los 10.000 millones en veinte ocasiones, los restantes Centros y Organismos de la Administración del Estado lo han utilizado en contratos de cuantía superior a 400 millones de pesetas, superándose en algún caso los 1.000 millones. En el Ministerio de Educación y Ciencia se ha empleado en contratos de importes comprendidos normalmente entre 150 y 400 millones por la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, y entre 150 y 500 millones por el Consejo Superior de Deportes -contratos que no parecen revestir especial complejidad, o al menos superior a las obras adjudicadas mediante subasta por otros Departamentos con importes notoriamente superiores-.

De acuerdo con el carácter discrecional de este sistema, las adjudicaciones recaídas en el mismo lo fueron en favor de las ofertas que se consideraron más convenientes para la Administración, primando normalmente los aspectos técnicos sobre los puramente económicos, con lo que las bajas obtenidas en este procedimiento son notoriamente más reducidas que las producidas en el de subasta, según se verá a continuación.

Por lo demás, las causas de aplicación de este sistema fueron las siguientes:

- Imposibilidad de elaborarse previamente el correspondiente proyecto por la Administración. De escasa utilización, esta causa es invocada principalmente por la Dirección General de Carreteras y más ocasionalmente por las de Obras Hidráulicas y de Tráfico, así como por el Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, respecto de obras de muy elevado importe económico, habiéndose obtenido bajas que oscilan entre el 1% y 2,10% en el primero de estos Centros y sin que se alcance el 1% en los demás Centros y Organismos señalados.

- Posibilidad de introducir en el proyecto elaborado por la Administración mejoras a proponer por los licitadores. Es la causa más frecuentemente alegada para la utilización del sistema de concurso y también aquélla por la que se obtienen mayores bajas, dentro de los reducidos márgenes del sistema. Así, fue aplicada en cuarenta contratos por la Dirección General de Carreteras, produciéndose bajas del 5% al 15%, en treinta y nueve contratos por la de Infraestructura del Transporte, con bajas del 10% al 25%, y por la de Obras Hidráulicas en veinte ocasiones, con bajas inferiores al 1%, así como más ocasionalmente por las Direcciones Generales de la Marina Mercante y de Tráfico, por el Instituto Nacional de Oceanografía y por el Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, con bajas que pueden integrarse en los bloques antes indicados. Ahora bien, dado el carácter genérico de esta causa debiera requerirse la determinación concreta de la parte del proyecto que pueda ser mejorado -requisito ya exigido por el art. 82.10 del Reglamento General de Contratación, pero de esporádico cumplimiento-, así como la justificación de las razones de no haberse realizado tales mejoras por la Administración. Por lo demás, en diez contratos celebrados por la Subdirección General de Transportes Terrestres -que se especifican en el Anexo V.6- se ha observado que fue prestada la fianza por el contratista con anterioridad a la adjudicación.

- Complejidad de la obra. Esta causa ha sido invocada en el ejercicio exclusivamente por la Dirección General del Libro y Bibliotecas y por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, por actuaciones en edificios destinados a Archivos y Bibliotecas y en el Teatro de la Opera y Auditorio Nacional, respectivamente, con presupuestos particulares comprendidos entre 200 y 900 millones de pesetas, habiéndose obtenido bajas escalonadas desde el 7,26% al 29,14%.

- No ser el precio el elemento esencial o no realizarse la selección del contratista en atención exclusivamente a la oferta más ventajosa. Con el distinto matiz antes indicado para cada uno de los semestres del ejercicio, por la entrada en vigor en 30 de Junio de la Ley de Presupuestos, y mezclando estas circunstancias con otras relativas a la complejidad de la ejecución de las obras y a la urgencia de las mismas, se ha invocado principalmente por la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, en setenta contratos relativos a obras en centros docentes y edificios del Departamento de importes comprendidos entre 150 y 400 millones de pesetas, obteniéndose bajas comprendidas entre el 1% y el 5%, y más esporádicamente en contratos también de pequeña cuantía del Consejo Superior de Deportes y de la Dirección General de Bellas Artes, con bajas similares. Sin embargo, y aún reconociendo el carácter genérico de aquellas causas, no parece muy correcto este proceder porque la mayoría de estas obras no parecen revestir una especial complejidad en la ejecución -o al menos superior a la de otros edificios de la Administración de mayor importe adjudicados por subasta- que exigiera que su adjudicación se realizara por este sistema discrecional.

En cuanto a la ejecución de estos contratos celebrados mediante concurso, y de acuerdo con los ya indicados planes de fiscalización, como regla general se comprobó la relativa a los de importes superiores a 300 millones de pesetas, observándose que en casi su cuarta parte se habían producido proyectos reformados que supusieron incrementos inferiores al 20% de los respectivos proyectos primitivos, salvo en los contratos relativos a las "Obras en la plaza Suero de Quiñones en el Auditorio Nacional de Música de Madrid", de "Rehabilitación de la Estación de Madrid-Atocha como edificio histórico" y de "Reconversión del Teatro Real en Teatro de la Opera de Madrid (Primera Fase)" en los que los porcentajes de aumento alcanzaron el 50,77%, 68% y 77,81% -porcentajes que revelan una considerable imprevisión en la elaboración de los respectivos proyectos de las obras primitivas, sin que en ningún caso se haya solicitado la resolución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52.2 de la Ley de Contratos del Estado, si bien de actuación potestativa para las partes, según el artículo 161 de su Reglamento, ni promovidas las investigaciones sobre posibles responsabilidades de los autores o supervisores de tales proyectos primitivos, a las que se refiere el artículo 154 del mismo Reglamento-, y, en algún caso aislado, que las obras objeto de estos reformados se habían iniciado antes de la fiscalización y aprobación del gasto correspondiente. Desde otro punto de vista, se observó también que la casi totalidad de estos contratos se encontraban aún en ejecución, no habiendo concluido su período contractual, o habían ya terminado dentro del plazo inicial y de sus prórrogas, o con pequeños retrasos de uno a dos meses, salvo los referentes a las obras en la citada plaza de Suero de Quiñones y el de "Instalación de un sistema de información al usuario y mejora de la seguridad vial en los accesos a Barcelona", que experimentaron retrasos de cinco y de dieciséis meses respecto de la fecha inicialmente prevista, sin que se haya comunicado a este Tribunal, a pesar de haberse solicitado, la concesión de prórrogas que justificaran estos retrasos, ni la imposición de sanciones en el caso de que se hubieran considerado imputables al contratista -pues, aunque en el caso concreto del Auditorio Nacional de Música, las alegaciones explican su retraso por la necesidad de interrumpir las obras durante las horas de conciertos y ensayos, no se justifica el que no se previeran estas interrupciones al establecerse el plazo de ejecución, ni la concesión de las oportunas prórrogas, aunque se exime de responsabilidad al contratista-; al tiempo que el relativo a la "Duplicación de la vía en el tramo Oviedo-El Berrón. Estación del Espíritu Santo" se encontraba en suspensión definitiva, por haberse decidido al soterramiento de las vías con posterioridad a la adjudicación, habiéndose solicitado su resolución, sin que en el momento del examen se tuviera conocimiento de la decisión definitiva.*

Respecto de los contratos celebrados por el Ministerio de Obras Públicas, en los que se intentó comprobar la ejecución de los de importe superior a 800 millones de pesetas, resultó -de manera similar a lo ocurrido en los contratos adjudicados mediante subasta- que de los dieciocho contratos seleccionados tan sólo en dos había vencido su plazo de ejecución, de los cuales uno había concluido dentro del mismo, continuando la ejecución del otro ya con retraso.

V.2.1.3.- Ejecución de contratos del Ministerio de Obras Públicas adjudicados en ejercicios anteriores

La carencia de datos definitivos respecto de los contratos adjudicados por el citado Departamento durante el ejercicio considerado en el presente Informe, ha llevado a la consideración del desarrollo de quince contratos adjudicados por las Direcciones Generales de Carreteras y de Obras Hidráulicas de dicho Departamento durante los años 1984, 1985, y 1986, que sufrieron incidencias en el ejercicio ahora considerado.

Como resultado de la misma -y según se detalla en los Anexos V.7 y V.8- se ha observado en general que, a pesar de sus dilatados plazos de ejecución, dichos contratos tuvieron distintas prórrogas y fueron objeto de uno o varios proyectos reformados que supusieron presupuestos adicionales cercanos al 20% del respectivo primitivo, así como de otros por obras

complementarias, constitutivos de nuevos incrementos de gasto por similares porcentajes, recibiéndose con considerables retrasos respecto de las fechas previstas en el contrato inicial. Si bien, como indican las alegaciones, no se trata de una muestra representativa de la general actividad del Departamento, sino -tal y como queda dicho- de la exposición de los contratos de una más complicada ejecución de los celebrados en los citados ejercicios que han tenido incidencias en el objeto del presente Informe, según datos conocidos por este Tribunal.*

V.2.2.- CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

El sistema de contratación directa fue utilizado en trescientos noventa y ocho contratos de los considerados en el ejercicio, con un importe total de 75.323 millones de pesetas, según se desprende de las cifras consignadas en al Anexo V.3 al presente Informe. De donde resulta que se aplicó a más de la mitad de los contratos de obras examinados, si bien canalizó tan sólo el 10% de la inversión total fiscalizada.

Desde otro punto de vista, y también según los datos del mencionado Anexo, este sistema fue utilizado por la práctica totalidad de los Departamentos que celebraron contratos de obras, destacando por la frecuencia de su empleo los de Obras Públicas y Urbanismo, Justicia, Interior, Defensa, Economía y Hacienda, Educación y Ciencia, y Cultura; y por la importancia de obra adjudicada, además de los anteriores, los de Asuntos Exteriores, Relaciones con las Cortes, y Transportes, Turismo y Comunicaciones.

En cuanto a la forma en la que ha sido aplicado este sistema, debe llamarse la atención nuevamente en este ejercicio sobre la escasa amplitud con la que, en general, se ha promovido en el mismo la concurrencia de ofertas, limitándose normalmente al mínimo legal de tres las consultas a los empresarios que se estimaron capacitados para la ejecución del contrato. Y asimismo se sigue observando en el ejercicio considerado la falta de documentación de las peticiones realizadas en dicha promoción de ofertas, y sobre todo de la justificación de las razones de haberse dirigido tales consultas cerca de determinadas empresas -de manera especial en los supuestos normales de que sean muchas las inscritas en el Registro de Contratistas de Obras del Estado, con clasificación suficiente-.

Por otra parte, en gran parte de los contratos adjudicados directamente se observa que las ofertas recibidas tienen fecha anterior a las de fiscalización y aprobación del gasto correspondiente; anticipación que supone el haberse solicitado ofertas a los interesados antes de elaborarse por la Administración su propia voluntad de celebrar el contrato y de aprobarse las condiciones jurídicas de la contratación, por lo que la indicada práctica únicamente resulta admitida para los contratos de obras en los concursos a los que se refieren los tres primeros apartados del art. 113 del Reglamento General de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto por al art. 88 de la misma disposición. Incluso, en aisladas ocasiones, dichas ofertas fueron anteriores a la supervisión y aprobación técnica del proyecto, con lo que el supuesto anterior se ve agravado por el hecho de haberse solicitado las ofertas cuando aún no existía un proyecto aprobado, ni se encontraban definidas sus condiciones técnicas.

Por lo demás, se pasa seguidamente a exponer las causas que se invocaron más frecuentemente en el ejercicio considerado para la aplicación de este sistema excepcional.

V.2.2.1.- Adjudicaciones directas de obras por imposibilidad o inconveniencia de promover concurrencia en la oferta

Esta causa de contratación directa, es de muy infrecuente aplicación en el contrato de obras en una forma pura, a diferencia de lo que ocurre en los contratos de suministros y de asistencia técnica. Esto no obstante, puede apreciarse en ocasiones su utilización respecto de las obras que se desarrollan en fases sucesivas, adjudicándose las subsiguientes al contratista de las primitivas, así como en las denominadas obras "accesorias o complementarias" a otras anteriores, que son adjudicadas al contratista de las obras principales; si bien en estos casos suelen apoyarse formalmente las adjudicaciones directas en razones de urgencia de las obras o en la aplicación del art. 153 del Reglamento General de Contratación.

A) Por lo que se refiere a las indicadas obras realizadas por fases o actuaciones sucesivas, debe advertirse previamente que, en su consideración individual, pudieran vulnerar lo dispuesto por el art. 21 de la Ley de Contratos del Estado, al no referirse a la obra a realizar en su totalidad, sin que en ningún caso se hayan elaborado los anteproyectos a los que se refieren los arts. 60, 61 y 62 de su Reglamento para aquellas obras en las que concurran especiales circunstancias de magnitud, complejidad o largo plazo de ejecución, el cual previera desde un primer momento la totalidad de las obras a realizar en las distintas fases. Dichas obras, por lo demás, se han observado en los siguientes contratos:

De la Dirección General de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda se han examinado los contratos relativos a las obras siguientes -todos ellos adjudicados a la oferta más económica de las presentadas, después de promover una amplia concurrencia, como indican las alegaciones-*:

a) "Remodelación del edificio para sede de la Escuela de Hacienda Pública en c/ Cardenal Herrera Oria nº 378, en Madrid (2ª Fase)"; cuyas obras fueron adjudicadas directamente en 14 de Septiembre de 1990, ante la "urgente necesidad de que el nuevo edificio entrara en funcionamiento en el plazo más breve posible", por 1.461.145.342 ptas, a la empresa contratista de la Fase anterior -que había sido adjudicada también directamente en 23 de Agosto de 1989, por 787.566.285 ptas, siendo objeto posteriormente de dos proyectos reformados que supusieron un incremento conjunto del 19,46%, y recibiéndose provisionalmente las obras con un retraso de ocho meses respecto del plazo inicialmente previsto-.

b) "Acondicionamiento del edificio de la calle San Enrique 34, de Madrid, para dependencias de la Secretaría General de Hacienda (2ª Fase)", que fue adjudicado directamente por urgencia, en 29 de Agosto de 1990, por un importe de 894.970.814 ptas, al contratista de la Fase anterior -también adjudicada directamente en 23 de Agosto de 1989 por 696.600.906 ptas, habiendo experimentado sendos proyectos por obras de reforma y complementarias que supusieron incrementos respectivos del 18,08% y del 7,98% y recibiéndose las obras principales y de reforma con retraso de once meses respecto del plazo inicialmente previsto-, obras de reforma y complementarias de las que tampoco se vio libre esta 2ª Fase, significando incrementos respectivos del 16,14% y del 9,13% respectivamente.

c) "Remodelación de la Delegación de Hacienda de Madrid", también adjudicado directamente en 27 de Diciembre de 1990 con un importe de 904.598.363 ptas, por razones de urgencia , "al estar a punto de concluir las obras de ampliación de dicha Delegación" -también adjudicadas al mismo contratista en 19 de Enero de 1988, por 740.270.399 ptas-.

De la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura, se ha examinado el contrato relativo a la "Restauración del claustro de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla (1ª Fase)", adjudicado en 13 de Septiembre de 1990, por 146.626.475 ptas a la "empresa que viene realizando otras obras en la Capilla de afuera y las 3ª y 4ª Fases de la Zona Conventual central, para evitar interferencias".

Del Museo Nacional Centro de Arte "Reina Sofía" se ha examinado el contrato referente a la "Rehabilitación y adecuación a sus nuevos usos de las plantas 0, 1ª, 2ª y 5ª, y obras complementarias de finalización del edificio" de dicho Museo Nacional, adjudicado directamente por razones de urgencia, en 25 de Septiembre de 1990, por un importe de 1.734.866.253, a la misma empresa que en los años anteriores había obtenido los contratos correspondientes a la nueva configuración del Centro por un importe total de 2.205 millones de pesetas, justificándose aquella urgencia en la necesidad de proceder a la nueva apertura al público del Centro en 30 de Octubre de 1990, con un programa de exposiciones ya comprometido en firme, -no obstante de lo cual, el acta de iniciación de las obras lleva fecha posterior (23 de Noviembre de 1990) a la de la indicada reinauguración del Centro-; habiéndose realizado las obras de este contrato sin previo expediente, ya que su gasto hubo de ser convalidado por el Consejo de Ministros. Por lo demás, referidos a este mismo edificio y adjudicados al mismo contratista en el ejercicio considerado, se han examinado también contratos reformados y complementarios a los celebrados en ejercicios anteriores, que representan incrementos del 41,43%, 46,51% y 14,69% de los respectivos presupuestos primitivos, y cuyas fechas de terminación resultan también ser posteriores a las de la repetida fecha de reapertura del Centro.

De la Dirección General de Servicios del Ministerio de Justicia, se han examinado los contratos relativos a la "Remodelación urgente del edificio de Juzgados en la Plaza de Castilla, de Madrid" y de "Seguridad y control, señalización y acondicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", que fueron adjudicados a las empresas constructoras de los edificios por importes de 782.441.085 y 78.491.466 pts, observándose que en el primero de ellos hubo de convalidarse su gasto por el Consejo de Ministros. Sin que las alegaciones justifiquen el hecho de no haberse previsto ambas obras al tiempo de proyectar las respectivas primitivas ni tampoco, el haberse realizado las primeras sin previa fiscalización y aprobación del gasto correspondiente; actuación que tan sólo resulta autorizada en nuestro Derecho, en virtud de lo dispuesto por el art. 27 de la Ley de Contratos del Estado, para los casos de "emergencia" a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la Defensa Nacional.*

De la Dirección General de Administración Penitenciaria, del mismo Departamento, se ha examinado el referente a las "Obras de urbanización, mejoras y puesta a punto del Centro Penitenciario de Jaén", adjudicado en 28 de Diciembre de 1989, por 446.975.000 ptas, al contratista de las primitivas -que habían sido adjudicadas en 1985 por 1.083.492.424 ptas, siendo objeto posteriormente de un reformado constitutivo de un aumento del 19,44%-, observándose también que en la misma fecha se adjudicó al mismo contratista otro contrato relativo a "Obras de seguridad" en el mismo Centro por 140.050.250 ptas.

B) Por lo demás, en cuanto a las también indicadas "Obras accesorias y complementarias" a otras anteriores que la Administración acuerde realizar durante la ejecución de éstas, se han producido con relativa frecuencia -según se recoge puntualmente a lo largo del presente informe-, adjudicándose normalmente al mismo contratista de las obras principales, ya al amparo del párrafo segundo del art. 153 del Reglamento de Contratación, cuando su importe no excedía del 20% del presupuesto de dichas obras principales, ya directamente, como contrato independiente, por imposibilidad o inconveniencia de promover concurrencia en la oferta o por razones de urgencia, en caso contrario.

Con relación a ellas, debe indicarse que, desconocida esta figura en la ley de Contratos del Estado, es una creación de su

Reglamento que las regula dentro de las "modificaciones del contrato", junto a las obras de reforma. Sin embargo, en la práctica resulta muy difícil la distinción de ambos tipos de obras, que en ocasiones se refieren a actuaciones similares, dando la impresión en la mayor parte de los casos examinados de que se ha acudido a estas obras complementarias cuando el importe supuesto por las de reforma rozaba el porcentaje del 20% del proyecto primitivo, considerado por la ley de Contratos del Estado como causa de resolución del contrato, si bien de actuación potestativa, por el contratista o por la Administración.

V.2.2.2.- Adjudicaciones directas de obras por razones de secreto o de seguridad del Estado

En el ejercicio considerado ha sido utilizada por los siguientes Centros, limitándose las alegaciones a reiterar los motivos de "secreto" o "seguridad del Estado", fundamento de sus contrataciones directas, ya expuestos en los contratos examinados y tenidos en cuenta en la redacción del Informe.*

Subsecretaría del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno, que la ha empleado en siete contratos referentes a obras en edificios ubicados en el Complejo de la Moncloa, por un importe conjunto de 1.547 millones de pesetas, habiéndose solicitado las ofertas y recaído las adjudicaciones respecto de empresas que habitualmente trabajan en el mencionado Complejo, obteniéndose pequeñas bajas que sólo en dos ocasiones sobrepasan el 1,25%.

Dirección de Infraestructura del Cuartel General del Ejército, que adjudicó por esta causa treinta y cinco contratos, relativos a construcciones militares, por un importe global de 6.387 millones de pesetas, todos ellos en favor del Servicio Militar de Construcciones, en virtud del convenio de este Organismo con el Ministerio de Defensa de 29 de Julio de 1988.*

Dirección General de la Guardia Civil. Ha utilizado esta causa en cuarenta y tres contratos, relativos a la construcción, adecuación y reparación de pabellones, viviendas, casas-cuartel y otros edificios de dicha Dirección General, por un importe total de 12.236 millones de pesetas, aduciéndose "razones de seguridad, que exigen que las obras se ejecuten por empresas de confianza", lo que refleja amplitud en la interpretación de aquella causa de contratación directa, al haberla aplicado a todas las obras del Centro, cualquiera que fuera su ubicación geográfica. Sin embargo, a pesar de aquellas razones se observa que para dichos cuarenta y tres contratos se solicitaron ofertas a sesenta y una empresas, si bien las adjudicaciones recayeron en un grupo de dieciocho -advirtiéndose que en más de la mitad de estos contratos la oferta de la empresa que resultó adjudicataria venía acompañada de otras que excedían del presupuesto de contrata, por lo que no podían tenerse en consideración-, alcanzándose bajas que en la mayor parte de las veces no superaron el 1%.

Dirección General de la Policía. Adjudicó directamente por esta causa veinticinco contratos, relativos fundamentalmente a la construcción, reforma o reparación de edificios destinados a Comisarías o a otros servicios del Centro, por un total de 5.506 millones de pesetas, añadiéndose en ocasiones la indicación de "para evitar la divulgación de instalaciones que puedan dar lugar a atentados"; habiéndose dirigido las invitaciones para concurrir a cuarenta y siete empresas, de las que resultaron dieciséis adjudicatarias, y obteniéndose bajas del 1,17% al 8,75%.

V.2.2.3.-Adjudicaciones directas por el carácter artístico de las obras

Esta causa es característica del Ministerio de Cultura, habiéndose empleado en el ejercicio considerado en seis contratos celebrados por su Dirección General de Bellas Artes, relativos a obras de restauración de edificios artísticos, (por un importe total de 589 millones de pesetas), en los cuales se promovió la concurrencia de forma desigual, obteniéndose bajas que en su mayoría no sobrepasan el 1%, si bien en casos aislados se alcanzó el 10%.

Excepcionalmente se ha observado la aplicación de esta causa de contratación directa en dos contratos celebrados por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, referentes a la "Rehabilitación de viviendas y residencia en la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso (Segovia)" y a la "Restauración y rehabilitación de edificios y accesos al Castillo de Granadilla (Cáceres)", cuyos respectivos entornos habían sido previamente declarados Conjuntos Históricos-Artísticos, por un importe total de 190 millones de pesetas. Con relación a ellos se ha observado que mientras que en el primero, en el que se promovió una cierta competencia, ya que presentaron ofertas seis empresas, y se obtuvo una baja del 12,10%, en el segundo, en el que sólo se consultó a la empresa que resultó adjudicataria y a otras dos que excusaron su participación, la baja obtenida fue de tan sólo el 1,48%.

V.2.2.4.- Adjudicaciones directas de obras por razones de urgencia

Al igual que en ejercicios anteriores, en el ahora considerado ha sido esta causa la más frecuentemente invocada para la adjudicación directa de los contratos de obras, siendo además de utilización extendida a los distintos Departamentos ministeriales, pues si bien presenta especial incidencia en los de Educación y Ciencia y de Obras Públicas y Urbanismo -en los que la aplicación de esta causa de contratación directa se ve comparativamente atenuada por el gran número de contratos que se celebran por los sistemas de publicidad y concurrencia general-, y además en los de Justicia, Economía y Hacienda y Cultura, se ha aplicado también, aunque con menor importancia, en los de Asuntos Sociales, Defensa, Trabajo y Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Con relación a esta causa debe advertirse que, en la mayor parte de las ocasiones en las que se ha invocado, la urgencia podía haberse eliminado mediante la oportuna previsión con antelación suficiente de la necesidad que la motivara, de manera que se hubiera contado con tiempo bastante para realizar la contratación por los normales sistemas de concurrencia general, incluso en la modalidad abreviada, regulada por el art. 26 de la Ley de Contratos del Estado.

También debe insistirse en que la pronta realización del objeto del contrato ha de buscarse, más que en la forma de adjudicación, en la rapidez en la tramitación del correspondiente expediente de contratación y sobre todo en la celeridad en la ejecución de las obras, pues se observa con bastante frecuencia que algunas de las contratadas directamente por esta causa sufren retrasos en su ejecución respecto del plazo inicialmente previsto, que sobrepasan con creces las ventajas de tiempo que pudieran haberse obtenido en su contratación.

Por lo demás, dentro de los contratos examinados que fueron adjudicados directamente por esta causa, pueden destacarse los siguientes:

Dirección General de Servicios del Ministerio de Justicia. Se han examinado veinticinco contratos relativos a edificios judiciales, por un importe conjunto de 2.301 millones de pesetas, cuya urgencia se derivaba principalmente de la aplicación de la Ley 38/1988, de Demarcación y de Planta Judicial, de 28 de Diciembre, que dispuso la creación de determinados órganos judiciales y la transformación de otros, obteniéndose bajas que sólo en un caso rebasaron el 0,5%. En cuanto a su ejecución, dos de ellos fueron objeto de reformados, con aumentos que rozan el 20%, y otro de un proyecto complementario, con incremento del 31,77% , mientras que cinco[1] hubieron de ser convalidados por el Consejo de Ministros por haberse realizado las obras sin previo expediente; sin que la urgencia de estas obras, explicada en las alegaciones, sirva para justificar esta actuación, tan solo admisible en los supuestos de "emergencia", regulados por el citado art. 27 de la Ley de Contratos del Estado. Por otra parte, veinte de estos contratos fueron concluidos dentro del plazo contractual; llegándose incluso en diez de ellos a reducir el plazo de ejecución, al ser finalizadas las obras en sólo uno o dos meses.*

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, del Ministerio de Educación y Ciencia. Se han examinado veinte contratos relativos a obras a realizar en centros docentes ubicados en la provincia de Madrid, por un importe total de 4.693 millones de pesetas, cuya urgencia se basaba en diecisiete de ellos en la apremiante necesidad de puestos escolares para el curso 1990-91 y en los tres restantes en razones de seguridad para las personas o para las edificaciones, habiéndose obtenido bajas normalmente inferiores al 5%. En cuanto a su ejecución, se ha observado que en cuatro contratos las obras se iniciaron con un retraso de nueve a doce meses desde su adjudicación. Por otra parte, se ha enviado el acta de recepción provisional respecto de quince contratos, siete de los cuales arrojan retrasos de cinco a doce meses respecto de las fechas en las que debían haber concluido, pero sin que se haya justificado si estas demoras se produjeron en la ejecución de las obras o en el acto formal de su recepción, ni la situación de las cinco obras restantes, por no haberse enviado la última certificación expedida para su pago. Sin que las alegaciones contradigan estas informaciones, ni mucho menos aclaren las aludidas demoras, limitándose a ampliar las razones de la urgencia.*

Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Se han examinado ocho contratos, por un importe conjunto de 3.892 millones de pesetas, cuya urgencia se motivó fundamentalmente en la reparación de daños ocasionados en presas y acequias por inundaciones, habiéndose obtenido en su adjudicación bajas del 0,02% al 7,32%. Sin embargo en cinco de estos contratos se observa que su tramitación ocupó de ocho a diecinueve meses, mereciendo especial mención el contrato relativo a ,la "Obra complementaria en el embalse de Alfonso XII.- Variante del camino de acceso al embalse, punto kilométrico 9,400.- Término Municipal de Calasparra (Murcia)" cuyo expediente fue declarado de urgencia en 20 de Octubre de 1989, en base al informe de la Confederación Hidrográfica del

---

[1] Dichos contratos son concretamente los siguientes:

- "Remodelación urgente del edificio de Juzgados en plaza de Castilla, Madrid" adjudicado en 24 de Abril de 1990, por 782.441.085 ptas.

- "Reforma y posterior adaptación del Llar de la Infancia en Palma de Mallorca para ocupación posterior por Juzgados", adjudicado en 29 de Diciembre de 1989, por 92.191.302 ptas.

- "Habilitación de locales comerciales para Juzgado Penal, Juzgado de Primera Instancia y Juzgado de Menores", adjudicado en 30 de Marzo de 1990, por 46.207.695 ptas.

- "Adaptación de espacios en el edificio Xifré para instalación de los Juzgados Penales en Arenys de Mar.- Barcelona", adjudicado en 11 de Diciembre de 1989, 82.717.320 ptas.

- "Adecuación de un edificio para doce Juzgados de Primera Instancia, en c/ Bergara nº 12, Barcelona", adjudicado en 11 de Diciembre de 1989, por 400.389.500 ptas.

Segura de 6 de Junio de 1988, pero cuyas actuaciones se paralizaron hasta que fue nuevamente declarado de urgencia en 19 de Junio de 1990 y adjudicado en 18 de Septiembre siguiente. En cuanto a su ejecución, todos los contratos examinados fueron terminados en plazo, salvo el que se acaba de mencionar que se encuentra aún en curso, estando en tramitación un proyecto reformado.

Dirección General de Carreteras del mismo Departamento. Se han examinado seis contratos por un importe de 2.314 millones de pesetas, relativos fundamentalmente a la mejora o resolución de problemas circulatorios, especialmente en puntos peligrosos o de gran tráfico, y en una ocasión al "Emplazamiento del monumento conmemorativo a la batalla de Talavera" para que pudiera ser inaugurado en la fecha de su aniversario; tramitándose sus expedientes con cierta celeridad, salvo en el caso de la obra "38 - M 4650.- Nuevo puente sobre el ferrocarril suburbano Aluche-Móstoles" en el que transcurrieron veinte meses desde la supervisión del proyecto a la iniciación de la obra. Por lo demás, sólo tres de estos contratos fueron ejecutados en el plazo contractual y cumplieron sus objetivos, pues en el relativo al citado monumento las obras se iniciaron pasada la fecha prevista para su inauguración -aunque fueron realizadas en tan sólo un mes, frente a los ochenta días previstos-, al tiempo que otros dos contratos sufrieron sendos reformados que se tradujeron en retrasos de doce y seis meses sobre el plazo inicialmente previsto.

Dirección General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda. Se han examinado seis contratos relativos a obras en edificios cuya gestión corresponde a este Centro, por un importe total de 1.662 millones de pesetas, en los que fue promovida la concurrencia con una cierta amplitud, obteniéndose bajas del 7% al 31%. En cuanto a su ejecución, y a pesar de su alegada urgencia, todos estos contratos sufrieron considerables retrasos respecto de los plazos inicialmente previstos, especialmente los referentes a las residencias de los Presidentes del Senado y del Congreso que experimentaron demoras superiores al año. Por otra parte, este último contrato así como los relativos a las "Obras de consolidación y rehabilitación de la Casa de Infantes de El Pardo", y a la "Construcción del edificio administrativo de servicios múltiples de Valencia" tuvieron reformados del orden del 20% de los presupuestos primitivos y además otros contratos por obras complementarias que supusieron incrementos del 106%, 28,75% y 30,13%, siendo además adjudicados con bajas notoriamente inferiores a las obtenidas en los respectivos contratos principales. Por lo demás, y en cuanto a la invocada urgencia de estos contratos y a sus posteriores retrasos y aparición de complementarios, aducen las alegaciones la complejidad de las obras y la peculiaridad de sus destinatarios (Presidentes del Congreso y de Senado), pero sin que se justifiquen las razones de no haberlas previsto al tiempo de redactarse los proyectos primitivos.*

V.2.2.5.- Adjudicaciones directas de obras por razón de su cuantía

El texto primitivo de la Ley de Contratos del Estado permitió la adjudicación directa, por razón de su cuantía, de los contratos de importe inferior a 25 millones de pesetas, cantidad que durante el período considerado en el presente Informe fue elevada a 50 millones por la Ley de Presupuestos para el ejercicio, de 29 de Junio de 1990.

En cualquiera de los casos, estos contratos debían quedar fuera de la fiscalización del Tribunal por aplicación de los criterios de selección de los contratos a examinar, indicados en el epígrafe VI.1.2. Como también se dijo en el mismo, dichos criterios se rebajaron para el caso de contrataciones directas en los supuestos en los que se detectaron adjudicaciones en favor de un mismo empresario de manera reiterada o con relación a varias obras de contenido similar. De esta manera, se han examinado los siguientes contratos:

La Secretaría General de Turismo, del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, tramitó de forma paralela los expedientes relativos a las obras de "Restauración del artesanado, retablo de la capilla y pinturas murales de la Sala Dorada, en el Parador de Zafra" y de "Restauración de balaustradas exteriores y claustro de mármol" en el mismo Parador, adjudicando ambos contratos en el mismo día, 28 de Diciembre de 1990, a la misma empresa -única oferta que se adjunta al expediente-, por importes respectivos de 23.398.160 y 20.916.172 ptas, que supusieron bajas del 5,70% en ambos casos. En estos contratos destaca el que, teniendo plazos de ejecución de tres y de cuatro meses, se haya acreditado obra por el 99,46% y el 98,25% de su total respectivo en el primer mes de su ejecución, si bien no finalizaron ambas hasta Marzo de 1991.

La Dirección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas adjudicó los contratos referentes a la "Sustitución de pavimentos en las plantas 5ª, 6ª y 7ª y despachos de la 9ª en el edificio de la calle María de Molina 50, de Madrid" y a la misma operación "en la planta 8ª y pasillos y despachos de la 9ª" del mismo edificio, en 29 de Agosto y 8 de Noviembre de 1990, a la misma empresa, por importes respectivos de 43.897.600 y 22.370.600 ptas, con bajas del 1,01% y 0,41%, después de haberse solicitado ofertas a las mismas empresas en ambos casos. Las alegaciones destacan la diferencia de fechas entre ambos contratos -debida a insuficiencias presupuestarias- como muestra de su independencia, pero no justifican el hecho de que en la segunda contratación se volviera a consultar a las mismas empresas que en la primera, incluidas aquéllas que habían demostrado no ser competitivas en dicha contratación, resultando adjudicataria la misma empresa en ambos casos por haber sido su oferta la más económica de las solicitadas.*

El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) adjudicó directamente cuatro contratos de obras, por un importe conjunto de 97 millones de pesetas, con bajas del 2,5%, referidos a "Obras de reforma y conservación de la planta 4ª del edificio de c/ Almagro 33, de Madrid", a similares obras en la "planta 5ª" del mismo edificio, a la "Impermeabilización de las cubiertas del edificio sito en c/Beneficiencia 3, de Madrid" y a la "impermeabilización (2ª Fase) de la cubierta y terraza y limpieza de fachadas" en este mismo edificio, cuyos importes individuales rozaban el límite establecido para la contratación directa en la época de las respectivas contrataciones, habiéndose solicitado ofertas en todos ellos a las mismas empresas y resultando en los cuatro casos el mismo adjudicatario, sin que tampoco aquí justifiquen las alegaciones la reiteración de solicitud de ofertas a empresas que no demostraron su competitividad en la contratación anterior.*

Se debe indicar, además, que el informe de fiscalización plena, elaborado por la Intervención, manifiesta que "todos los expedientes de contratación, excepto un contrato del servicio de limpieza, fueron celebrados por contratación directa" -afirmación que se corresponde con la información existente en este Tribunal- y que "durante 1990 y el primer trimestre de 1991 se han adjudicado contratos de obras por el procedimiento de contratación directa a una persona física por un importe total de 118.499.160 ptas y a una empresa cuya denominación coincide con el nombre de la anterior por un importe de 34.222.381 ptas", según listados que se acompañan a dicho informe -indicándose en las alegaciones que tales empresario individual y sociedad mercantil tienen personalidad y capacidad jurídica diferentes-.*

V.3.- CONTRATOS DE SUMINISTRO

Estos contratos relativos fundamentalmente a la compra o fabricación de bienes muebles, tienen una menor importancia que los de obras, habiéndose examinado cuatrocientos doce contratos de los celebrados en el ejercicio de 1990, por un importe global de 187.055 millones de pesetas, según se desprende de las cifras consignadas en el Anexo V.1; lo que viene a significar casi la tercera parte de los contratos considerados y tan sólo el 18,26% del importe total fiscalizado.

Con relación a los mismos debe destacarse previamente el haber sido celebrados por un número reducido de Departamentos ministeriales, principalmente por el Ministerio de Defensa con trescientos seis contratos por un importe global de 175.346 millones de pesetas, seguido a muy considerable distancia por el de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y por los de Economía y Hacienda, Interior y Agricultura, Pesca y Alimentación. Igualmente debe destacarse el hecho de referirse el contrato de suministro a una gran variedad de artículos, muy distintos entre sí según las necesidades de los Departamentos y servicios a los que se destinan, lo cual ha dificultado hasta el momento el establecimiento de un sistema de clasificación previa de los suministradores, al contrario de lo que sucede respecto de los contratos de obras y de servicios.

Por otra parte, debe también observarse que, a diferencia del contrato de obras, en el que se partía normalmente de un proyecto elaborado por la Administración en el que se preveían con todo detalle las distintas unidades intervinientes en la construcción, en los suministros, al tratarse normalmente de bienes producidos por los fabricantes según sus propias técnicas y procedimientos, la Administración debe limitarse a señalar sus necesidades y las características de los artículos que pretende adquirir, decidiendo en la adjudicación cual de los ofrecidos le resulta más conveniente, atendidas conjuntamente sus características técnicas y económicas.

De acuerdo con lo anterior, y según se figura en el Anexo V.4, la mayor parte de los contratos de suministro examinados en el ejercicio considerado -trescientos veintinueve contratos por un importe global de 154.845 millones de pesetas, lo que supone las cuatro quintas partes de los de esta naturaleza que han sido examinados y el 82,78% de su cuantía- fueron adjudicados directamente, contratándose el resto -ochenta y tres contratos por 32.210 millones de pesetas- mediante el sistema de concurso. No se ha detectado dentro los contratos seleccionados para examen ninguna adjudicación mediante subasta -prevista por el R.D. legislativo de 2 de Mayo de 1986 para el caso de que los productos a adquirir estuvieran perfectamente definidos-, ni mediante concurso por el procedimiento "restringido", también establecido por la misma disposición.

V.3.1.- CONTRATOS DE SUMINISTROS ADJUDICADOS MEDIANTE CONCURSO

Según se desprende de las cifras consignadas en el citado Anexo V.4, la gran mayoría de los suministros adjudicados mediante concurso público que han sido examinados -cincuenta y ocho contratos, por un importe global de 27.294 millones de pesetas- fueron celebrados por el Ministerio de Defensa, correspondiendo principalmente a la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del Cuartel General del Ejército y en menor cantidad y cuantía al Mando de Apoyo Logístico del Cuartel General del Aire.

En cuanto a los celebrados por el primero de dichos Centros, referidos en especial al servicio de vestuario -aunque existen de forma aislada otros referentes a la adquisición de distinto material de acuartelamiento, campamento y transporte-, se ha observado que las adjudicaciones recayeron generalmente en favor de las ofertas más económicas de las presentadas, salvo en tres ocasiones en las que se han enviado los informes técnicos justificativos, obteniéndose bajas que en la mayor parte de los casos oscilan entre el 1% y el 10% del presupuesto de contrata, aunque en cuatro ocasiones superaron el 20%, llegándose incluso hasta el 39,48%.

Por su parte, en los celebrados por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, referentes principalmente a material de vuelo y de aeródromos, por la mayor complejidad de los artículos adquiridos, prevalecen los criterios técnicos sobre los económicos a la hora de las adjudicaciones, obteniéndose bajas normalmente inferiores al 0,5%, aunque en un caso aislado llegaron al 11,6%.

Por lo demás, y en cuanto a la ejecución de estos contratos, si bien como indican las alegaciones en la mayor parte de ellos no había vencido el plazo final, se han observado retrasos generales referidos a sus plazos parciales, no habiéndose justificado la concesión de las prórrogas correspondientes. *

A considerable distancia de dicho Departamento se encuentra el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con quince contratos de suministro adjudicados mediante el sistema de concurso, por un importe global de 3.138 millones de pesetas, relativos fundamentalmente al equipamiento de aeropuertos y a sistemas de control de vuelos y de ayudas a la navegación, en cuyo examen se ha observado que, si bien fueron también frecuentes las adjudicaciones determinadas por criterios técnicos, en su mayor parte se obtuvieron bajas comprendidas entre el 1% y el 15% del respectivo presupuesto de contrata, superándose el 20% en la Subdirección General de Infraestructura del Transporte Aéreo e incluso el 30% en la Dirección General de Aviación Civil.

En cuanto a la ejecución de los contratos indicados en el párrafo anterior, merecen especial mención los celebrados por la Dirección General de la Marina Mercante, relativos a la "Adquisición de material auxiliar para remolcadores", por importes respectivos de 152.300.000 y 126.752.300 ptas, respecto de los que destaca el escaso tiempo concedido para su cumplimiento ya que, habiéndose adjudicado en 27 y 28 de Diciembre de 1990, se señalaba el momento de la entrega para "antes del día 31 del mismo mes"; y aunque el Centro contratante ha aclarado que para paliarlo fueron concedidas sendas prórrogas de cuatro meses en 15 de Febrero de 1991, resulta que dichas prórrogas fueron concedidas fuera de los respectivos plazos de ejecución y que su duración puede considerarse excesiva en cuanto que es igual al tiempo que en un principio se consideró "razonable" conjuntamente para la tramitación del expediente y para la ejecución. Por otra parte, el contrato relativo a la "adquisición e instalación de una estación de ósmosis en el aeropuerto de Tenerife-Sur", adjudicado en 18 de Octubre de 1990 por el entonces existente Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, por 110.722.649 ptas, con un plazo de ejecución de cuatro meses, fue objeto de una recepción provisional parcial en 21 de Diciembre siguiente por el 84,68% de su importe, y posteriormente de una suspensión temporal de nueve meses, durante la que se tramitó un proyecto reformado que supuso un incremento del 14,75% del presupuesto inicial, recibiéndose definitivamente el resto y su ampliación en 12 de Diciembre de 1991.

Por último, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han examinado cinco contratos celebrados por su Dirección General de Servicios, por un importe global de 683 millones de pesetas, derivados de las adjudicaciones de los distintos lotes de suministros de "vacunas y antígenos" y de diverso material con destino a la "campaña de saneamiento ganadero", en cuyos pliegos de cláusulas administrativas particulares se observó que no se especificaban la cantidad de material que se pretendía adquirir ni su precio unitario presupuestado, según exigen los núms. 2 y 3 del art. 244 del Reglamento General de Contratación, fijándose tan sólo el presupuesto total de cada adquisición. Análogo defecto se observó en otro contrato celebrado por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), referente a la adquisición de "retardantes químicos de largo plazo", por 59.999.989 ptas, en el cual se advirtió también que la respectiva fianza se constituyó con posterioridad a la formalización del contrato, no obstante lo cual dicha garantía figuraba ya en el documento mediante el que se formalizó, hecho considerado por el Organismo como "error material no subsanado".

V.3.2.- CONTRATOS DE SUMINISTRO ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

Este sistema ha sido con mucho el más utilizado en la contratación de suministros, con trescientos veintinueve contratos por un importe conjunto de 154.845 millones de pesetas -magnitudes que vienen a representar las cuatro quintas partes de los contratos de esta naturaleza que han sido examinados y el 82,78% de su cuantía total-.

Por otra parte, y según se desprende de las cifras consignadas en el Anexo V.4, la gran mayoría de los suministros adjudicados directamente corresponden al Ministerio de Defensa seguido a considerable distancia por los de Economía y Hacienda y de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno, y con mayor diferencia por los de Interior, Obras Públicas y Urbanismo, Transportes, Turismo y Comunicaciones, Cultura, y Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las causas generalmente alegadas para la utilización de este sistema de contratación directa en los suministros fueron las siguientes:

V.3.2.1.- Imposibilidad o inconveniencia en promover concurrencia en la oferta

A diferencia de los contratos de obras, en los de suministro esta causa es la más frecuentemente invocada para su contratación directa, habiéndose aplicado en doscientos veintitrés contratos por un importe global de 134.997 millones de pesetas.

En dicha aplicación destaca el Ministerio de Defensa, en los distintos Centros directivos de sus Cuarteles Generales, dada la especificidad de gran parte del material militar. Así, de la Dirección de Abastecimientos y Mantenimientos del Cuartel General del Ejército de Tierra se han examinado cincuenta y dos contratos relativos a adquisición de material específico de armamento, municionamiento, combustibles, comunicaciones y transportes, por un importe de 17.894 millones de pesetas, que fueron adjudicados directamente por existir un sólo fabricante o productor y otros treinta y seis, por un importe de 8.428 millones, en los que se alegó el tratarse de renovación parcial o de ampliación de bienes o instalaciones ya existentes y las dificultades técnicas que supondría el cambio de suministrador, justificándose en todo caso dichas circunstancias mediante certificado del General Director, y sin que se obtuvieran bajas por coincidir la oferta del contratista con el presupuesto de contrata.

También de las Direcciones de Aprovisionamientos y Transportes de la Armada y de Construcciones Navales se han examinado diecinueve y veintinueve contratos, respectivamente, relativos a la adquisición de repuestos de motores navales, radares y material electrónico, así como de combustibles, armamento y municionamiento para buques de la Armada y de equipo para sus tripulaciones, también adjudicados directamente por existencia de un sólo productor, e igualmente sin obtenerse baja alguna. Por último, del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire se han examinado cincuenta y cinco contratos relativos a la adquisición de aviones y helicópteros y de repuestos para los mismos, así como su revisión y modernización, y en menor medida de armamento, combustibles y sistemas de ayuda a la navegación, por un importe de 90.452 millones de pesetas, también por existencia de un único proveedor y prácticamente sin baja alguna.

Esta causa de contratación directa ha sido asimismo invocada, aunque en un número mucho más reducido de contratos y por importes notoriamente inferiores, por el Ministerio de Economía y Hacienda, y en particular por su Servicio de Vigilancia Aduanera, con siete contratos por 1.367 millones de pesetas, relativos a la adquisición de aviones, helicópteros y embarcaciones, así como de sistemas de observación y comunicaciones. Igualmente se utilizó en la compra de "uniformes de invierno" y de "prendas de abrigo" para el personal marítimo del Servicio, por importes respectivos de 30.941.014 y 37.514.400 ptas, en los que no se justificó plenamente la existencia de un sólo productor.

En menor medida también fue empleada esta causa por los Ministerios de Interior, con siete contratos por 361 millones de pesetas, relativos a la adquisición de armamento y material policial, y de Transportes, Turismo y Comunicaciones en sus Direcciones Generales de Aviación Civil, con cinco contratos relativos a la ampliación de suministros anteriores de sistemas de asistencia y control de la navegación aérea por importe de 1.036 millones de pesetas, y de Correos y Telégrafos, con dos contratos relativos a maquinaria y material postal por 231 millones de pesetas. Sin que tampoco en estos contratos se hayan producido bajas prácticamente.

Por lo demás, muy relacionada con esta causa de contratación directa, en cuanto que en muchas ocasiones es invocada conjuntamente con ella por los Ministerios de Defensa e Interior, es la referente a razones de secreto o de seguridad en la adquisición, que en forma independiente ha sido aplicada por los citados Departamentos en once contratos por un importe de 7.741 millones de pesetas. E igualmente fueron invocadas razones de secreto y de seguridad por el Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno en siete contratos relativos a sistemas de comunicaciones especiales del complejo de la Moncloa y a instalaciones en la Dirección de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis, por 312 millones de pesetas -cuatro de los cuales fueron ejecutados sin previa fiscalización, por lo que su gasto hubo de ser convalidado por el Consejo de Ministros; sin que basten para justificar este procedimiento absolutamente irregular las razones de urgencia en la entrada en servicio de alguno de estos suministros, aducidas en las alegaciones, ya que como se ha indicado anteriormente este procedimiento tan sólo es válido para los casos de emergencia-.*

Asimismo se encuentra muy relacionado con la repetida circunstancia de imposibilidad o improcedencia de promover la concurrencia de ofertas, el hecho de tratarse de bienes cuya uniformidad haya sido declarada previamente, en el cual se basó la adjudicación directa de dieciocho contratos relativos a la adquisición de armas y vehículos de transporte en los Ministerios de Defensa y de Interior, por 4.595 millones de pesetas, y de tres contratos referentes a la adquisición de distintos tipos de crotales para ganado, adjudicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por un importe global de 152 millones de pesetas.

V.3.2.2.- Razones de urgencia

De mucha menor frecuencia que la anterior causa de adjudicación directa en los contratos de suministro, tanto por el número a los que ha afectado -cuarenta y nueve- como por su cuantía -5.082 millones de pesetas-, es sin embargo de extensión similar a los distintos Departamentos ministeriales. Por otra parte, en su aplicación a los suministros pudieran reproducirse las mismas observaciones formuladas para el contrato de obras, en cuanto a la necesidad de prevenir la necesidad de las adjudicaciones con la suficiente antelación para permitir su contratación mediante un sistema de concurrencia general, y de buscar la pronta realización de los contratos más en su rápida ejecución que en la forma de su adjudicación.

Por lo demás, dentro de los casos en los que ha sido invocada esta causa de contratación directa, se pueden distinguir los siguientes:

La Dirección de Abastecimientos y Mantenimientos del Cuartel General del Ejército alegó la reconocida urgencia en veinte contratos por un importe de 3.149 millones de pesetas, basándose dicha circunstancia en la tardía aprobación de la Ley de Presupuestos del ejercicio, en las diversas reprogramaciones de créditos de vestuario y, más excepcionalmente en la expectativa de intervención española en la denominada "guerra del Golfo", habiéndose solicitado ofertas de tres empresas en cada caso y obteniéndose bajas que sólo en nueve ocasiones sobrepasaron el 1%. Por lo demás, en varios de estos contratos se observó que la fianza constituida por el adjudicatario resultaba insuficiente en pequeñas cantidades, salvo en el relativo a la "adquisición de distintas prendas de vestuario", adjudicado en 14 de Diciembre de 1990 por 259.792.500 ptas, en el que dicha insuficiencia alcanzó la cifra de 224.700 ptas. En cuanto a su ejecución se advirtió que en diez de estos contratos hubieron de concederse prórrogas en la misma, a pesar de lo cual se produjeron retrasos en catorce de ellos, sin que sea posible su resumen ya que la mayoría tuvieron distintos plazos parciales y las entregas se realizaron de forma fraccionada.

La Dirección General del Patrimonio del Estado adjudicó directamente por motivos de urgencia -"con objeto de ocupar el edificio en el plazo más breve posible"- dos contratos relativos al "Amueblamiento de la nueva sede del Consejo General del Poder Judicial" por un importe conjunto de 197 millones de pesetas. Sin embargo, con relación a ellos se ha observado que su período de tramitación fue de cuatro meses y medio, período durante el cual hubo tiempo suficiente para haber proveído a la contratación mediante un sistema de concurrencia general, mientras que por otra parte ambos contratos se recibieron con un retraso de cinco meses con relación al plazo primitivamente previsto. Las alegaciones indican, de una parte, que uno de estos contratos fue objeto de dos modificaciones -una de ellas fuera ya del plazo contractual- y, de otra, que los bienes se entregaron dentro de los plazos fijados, si bien no se procedió a su recepción oficial hasta que, después de instalados, el Organismo destinatario dio su conformidad; con lo cual no hacen sino trasladar el retraso desde el contratista a la Administración, ya que, de acuerdo con el art. 54 de la Ley de Contratos del Estado, el acto de recepción de conformidad debe marcar el inicio de la entrega de los bienes al uso público o al servicio correspondiente.*

El Museo Nacional, Centro de Arte "Reina Sofía" adjudicó directamente tres contratos relativos a aparatos de alumbrado, sistemas de seguridad y material museístico, por 299 millones de pesetas, fundamentando su urgencia en la próxima reinauguración del Centro en su nueva concepción para el 31 de Octubre de 1990. Sin embargo, las respectivas actas de recepción del citado material llevan fechas de 27 de Noviembre y 22 de Diciembre de 1990 y 11 de Junio de 1991, por lo que no pudo disponerse del material para la fecha prevista. De manera similar, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música adjudicó directamente el suministro de elementos para el equipamiento de la Sede del Ballet Lírico Nacional por 34.994.649 ptas, ante el comienzo de la temporada de ensayos en el mes de Septiembre de 1990, por lo que llama la atención el que se fijara el fin de su plazo de ejecución para el 15 de Noviembre del mismo año, y que el acta de recepción del material sea de fecha 26 de Diciembre siguiente. También aquí indican las alegaciones que el material objeto de los suministros fue recibido e instalado con anterioridad a la reapertura del Museo, si bien no se recepcionó formalmente hasta tiempo después; por lo que resultan de aplicación las mismas observaciones formuladas en el párrafo anterior.*

V.3.2.3.- Otras causas de contratación directa de los suministros

Por último, en base a lo dispuesto por el art. 395 del Reglamento General de Contratación, que permite a los Organismos autónomos la contratación directa de los suministros que constituyan el objeto directo de sus actividades y hayan sido adquiridos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial, el Boletín Oficial del Estado adjudicó cinco contratos por un importe conjunto de 994 millones de pesetas, relativos a la compra de papel prensa para la edición del "Boletín Oficial del Estado" y el "Boletín Oficial del Registro Mercantil"; observándose, al igual que en ejercicios anteriores[1], que cada una de las empresas que resultaron adjudicacatarias concurría siempre con el mismo grupo de empresas, y que en todo caso las ofertas presentadas por las que acompañaban a dichas adjudicatarias eran superiores al presupuesto de contrata. Por otra parte, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música adjudicó directamente, por la misma causa, otro contrato para la adquisición de material de escenografía para la ópera "Ana Bolena" por 32.578.750 ptas. Se entiende que en ambos casos el material adquirido se utiliza para la realización de las actividades de dichos organismos, integrándose en su producto final, pero que, en un sentido estricto, no se devuelve como tal al tráfico jurídico patrimonial.

Las alegaciones mantienen la aplicación del mencionado precepto del Reglamento para las adquisiciones de material de escenografía por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en base al informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 28 de junio de 1985. A pesar de lo cual, se sigue insistiendo en la estricta falta de devolución del material adquirido al tráfico patrimonial, requisito que no puede interpretarse en sentido amplio por tratarse de una condición básica para la aplicación de un sistema excepcional de contratación; todo ello sin perjuicio de advertir que el art. 87 de la Ley de Contratos del Estado podía haber ofrecido otros cauces legales para la adquisición directa de este material.*

En dichos contratos no se constituyó fianza definitiva, al amparo del art. 385 del mismo Reglamento que exime de esta garantía en los suministros en los que el empresario entregue inmediatamente los bienes consumibles, cuando en ambos casos se habían señalado plazos más o menos dilatados de ejecución; si bien en el segundo de dichos supuestos, por ser el proveedor extranjero, pudo sustituirse aquélla fianza por otra garantía "acorde con las prácticas comerciales internacionales", según lo dispuesto por el art. 384.3 del repetido Reglamento.

V.4.- CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Se han examinado trescientos catorce contratos de esta naturaleza, por un importe global de 84.037 millones de pesetas, según se desprende de las cifras consignadas en el Anexo V.1. Lo que viene a significar una quinta parte de los contratos analizados y el 8,20% del importe total fiscalizado.

Con relación a ellos debe destacarse previamente el hecho de haberse celebrado por la casi totalidad de los Departamentos ministeriales, según se desprende de los datos contenidos en el Anexo V.5; si bien se distinguen notablemente por su importancia en esta clase de contratación los de Obras Públicas y Urbanismo, Defensa y Economía y Hacienda -con ochenta y ocho, cincuenta y dos y cincuenta y un contratos, respectivamente, por un importe de 17.888, 27.017 y 15.363 millones de pesetas-.

Por otra parte, en cuanto al objeto de los contratos examinados, hay algunos característicos de determinados Departamentos, Centros u Organismos, como sucede con los referentes a la elaboración de proyectos de obras y a la asistencia técnica al control y vigilancia de su ejecución, propios del Ministerio de Obras Públicas, los relativos a la revisión, mantenimiento, reparación y modernización de armamento mecanizado, naves y aeronaves, específicos del Ministerio de Defensa, -en ambos casos por el número de contratos e importes que se acaban de indicar-, o los referidos a la formación del Catastro o al funcionamiento de los juegos organizados por el Estado, que son específicos del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, ambos dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda, con quince y dieciocho contratos respectivamente, por importes de 1.437 y 6.272 millones de pesetas. Mientras que, por el contrario, existe gran variedad de tipos de contratos que son concertados por la generalidad de los Departamentos ministeriales, como los referentes a campañas publicitarias, elaboración de estudios de naturaleza económica o social, prestación de asistencia informática y servicios de vigilancia y limpieza de edificios y dependencias públicas.

Dentro de este segundo grupo de contratos heterogéneos, destacan a su vez los relativos a campañas de publicidad, tanto por su número e importe -se han examinado ochenta y un contratos por un importe global de 20.129 millones de pesetas-, como por su extensión a la mayoría de los Departamentos ministeriales. Entre estos destacan el de Economía y Hacienda, con treinta y dos contratos referentes a la publicidad de instrumentos financieros emitidos por el Tesoro, información tributaria y juegos del Estado, por un importe global de 12.657 millones de pesetas, el de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con doce contratos relativos a publicidad de España en el extranjero, por 3.160 millones de pesetas, y los de Sanidad y Consumo y Agricultura, Pesca y Alimentación, con nueve y diez contratos respectivamente, por la realización de campañas de distinta naturaleza, con importes totales de 1.743 y 1.300 millones de pesetas respectivamente. Con relación a este tipo de contratos debe observarse que presentan una cierta dificultad en su examen, en cuanto que sus pliegos de cláusulas administrativas no suelen contener criterios exactos para la adjudicación, al tiempo que los de prescripciones técnicas dejan normalmente a la iniciativa de los licitadores, no sólo la presentación del mensaje a difundir, sino en ocasiones hasta la elección de los medios de difusión, de manera que las obligaciones asumidas por los adjudicatarios sólo se reflejan en los "planes de medios" presentados por los mismos, al tiempo que en su adjudicación son frecuentes las referencias a la "creatividad", "presentación", etc., muy difíciles de calibrar.

En cuanto a los sistemas de contratación aplicados a estos contratos de asistencia técnica, y a pesar de ser legalmente el concurso la forma normal para su adjudicación, los contratos examinados se distribuyen casi por partes iguales entre este sistema y el de contratación directa -según se desprende de los datos consignados en el Anexo V.5-. Debe destacarse el que, en cualquiera de ambos sistemas, la generalidad de las bajas obtenidas no alcanzan el 1%, siendo muy excepcional que rebasen el 10%, salvo en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

A continuación se pasa a exponer los contratos que destacan entre los examinados, clasificándolos, como en los epígrafes anteriores, según las distintas formas de adjudicación; si bien en las grandes operaciones, integradas por varios contratos, puede ocurrir que coexistan distintos sistemas de contratación.

V.4.1.- CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ADJUDICADOS POR CONCURSO

De acuerdo con las cifras consignadas en el citado Anexo V.5, se han examinado ciento cuarenta y tres contratos de asistencia técnica adjudicados mediante concurso, con un importe global de

[1] Ver Informes de los años 1987, 1988 y 1989

38.272 millones de pesetas, que vienen a significar el 45,55% de los de esta naturaleza y de su cuantía. De entre ellos destacan los siguientes:

Direcciones Generales de Carreteras y de Obras Hidráulicas, ambas del Ministerio de Obras Públicas. Se han examinado cincuenta y siete contratos relativos en general a la elaboración de estudios y proyectos de obras y a la asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de su ejecución, con importes individuales comprendidos normalmente entre 100 y 400 millones de pesetas, en el primero de los Centros indicados, y entre 100 y 300 millones en el segundo, habiéndose producido las adjudicaciones en favor de las ofertas que en cada caso se consideraron más convenientes -que sólo en quince contratos coincidieron con las más económicas- y obteniéndose bajas comprendidas la mayor parte de las veces entre el 1% y el 15% en la Dirección General de Carreteras y el 5% y el 10% en la de Obras Hidráulicas, con máximos respectivos del 19,68% y 15,99%.

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda. Dentro de los contratos de asistencia técnica celebrados por este Organismo destacan los referentes a campañas publicitarias, ya "genéricas o de producto" relativas a los distintos juegos gestionados por el mismo, ya "promocionales" de los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional o de aquéllos de las Quinielas y Lotería primitiva en los que exista "Bote"; campañas que originaron seis contratos adjudicados por concurso, con un importe total de 4.650 millones de pesetas, que fueron seguidos en cuatro ocasiones por distintas ampliaciones por otros 550 millones.

Respecto de ellos, cabe destacar el hecho de que los indicados concursos se resolvieron en favor de dos empresas que obtuvieron adjudicaciones por 2.400 y 2.250 millones de pesetas cada una, incrementadas respectivamente en otros 300 y 250 millones por las también citadas ampliaciones, adjudicaciones que se realizaron -dadas las especiales características de las campañas "promocionales", cuyo número no puede precisarse ni por aproximación para períodos concretos, por ser absolutamente aleatorio-, no en función de cantidades absolutas, sino en atención a los descuentos y rappels ofrecidos por los licitadores, es decir, a las proposiciones económicas de mayor interés para el Organismo.*

Dirección General de Gestión Tributaria, del Ministerio de Economía y Hacienda.- Se ha examinado un contrato relativo a la "campaña global para establecer una estrategia de comunicación con los contribuyentes durante el año 1990" -que diera homogeneidad a todas las campañas informativas sobre las obligaciones tributarias, sobre la recaudación impositiva como elemento financiador del gasto público y sobre la distribución de éste entre las distintas necesidades sociales-, adjudicado mediante concurso en 6 de Febrero de 1990 por un importe de 979.979.840 ptas, el cual fue seguido por dos ampliaciones por una cuantía conjunta de 195.995.960 ptas, así como de otro concurso por el segundo semestre del ejercicio, adjudicado a la misma empresa por 399.972.318 ptas, y también ampliado posteriormente en 79.994.560 ptas.

Una característica de estos concursos es su carácter abierto, de manera que sus pliegos de prescripciones técnicas recogen únicamente las campañas que se consideran básicas "lo que no impide -según ha indicado el Centro contratante- que las empresas concursantes propongan otro tipo de acciones siempre que guarden armonía con la estrategia de comunicación propuesta", mientras que, por otra parte, "la coyuntura informativa puede imponer la realización de campañas distintas de las previstas en un principio". Esta característica dota al contenido de estos contratos de una cierta versatilidad, que hace que las licitaciones -que han supuesto un total de adjudicaciones a la misma empresa cercano a 1.656 millones de pesetas- se realicen, como en los contratos anteriores, atendiendo a los descuentos y rappels ofrecidos por los licitadores.

Dirección General del Tesoro y Política Financiera, del mismo Departamento. Se han examinado cuatro contratos celebrados mediante concurso público, relativos a campañas genéricas, "informativa e institucional", y específicas sobre los instrumentos financieros emitidos por el Tesoro, correspondientes al segundo semestre de 1990, por un importe global de 3.056 millones de pesetas. Se ha observado en el concurso relativo a la "campaña institucional" que, mientras que la Mesa de Contratación, en su acta de 2 de Julio de 1990, seleccionó a los efectos de su propuesta de adjudicación a la oferta más económica de las presentadas junto con otras dos de las más elevadas, la resolución de adjudicación de 5 de Julio siguiente tan sólo tuvo en cuenta a las tres ofertas más elevadas, sin que se justifique este cambio en la terna propuesta. Las alegaciones -que en este punto expresan conjuntamente consideraciones relativas a estos concursos con otras referentes a prórrogas y a contrataciones directas, que se examinarán en el epígrafe V.4.2.2- indican que dicha circunstancia se debió a un "error material". Por lo demás, debe advertirse que este Centro directivo ha realizado adjudicaciones por razones de urgencia, en el segundo trimestre del ejercicio o con ocasión de emisiones especiales, por un importe conjunto de otros 2.102 millones de pesetas, que se examinarán en el apartado siguiente.*

V.4.2.- CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

De acuerdo con las cifras consignadas en el citado Anexo V.5, se han examinado ciento setenta y un contratos de asistencia técnica adjudicados directamente, con un importe global de 45.765 millones de pesetas, que vienen a significar algo más de la mitad de los de esta naturaleza que fueron seleccionados y el 54,46% de su cuantía total; apareciendo, por lo tanto, prácticamente equilibrados con los celebrados mediante concurso, a pesar del carácter excepcional de aquel sistema.

En cuanto a las causas generalmente alegadas para la adjudicación directa de estos contratos, fueron las siguientes:

V.4.2.1.- Imposibilidad o inconveniencia de promover concurrencia en la oferta

Al igual que en los contratos de suministro, esta causa fue la más frecuentemente invocada para la contratación directa de los de asistencia técnica, destacando entre los celebrados por ella los siguientes:

Subsecretaría del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno.- Se ha examinado el contrato relativo a la "prestación de servicios de cobertura informativa a la Administración del Estado durante el año 1990", adjudicado directamente a la Agencia "EFE" en 1 de Junio de dicho año, por imposibilidad de promover concurrencia en la oferta ya que su dotación presupuestaria (25.02. 126B. 227.07) figura a nombre de la citada Agencia, por un importe de 3.805.912.000 ptas, que coincide exactamente con el del mencionado crédito legislativo.

Con relación a dicho contrato hay que señalar, de un lado, la vaguedad con la que se define su objeto, al indicarse como tal por la cláusula primera del pliego de prescripciones técnicas "la prestación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional, según las necesidades del Estado y con la intensidad que la Administración considere oportuna, sin más limitaciones que las derivadas de la estructura y medios de la empresa adjudicataria"; sin que en el resto de la citada cláusula -que transcriben las alegaciones- se determine concretamente la forma de desarrollar aquel servicio, especificando las prestaciones informativas y gráficas a realizar en cada caso y, sobre todo, los precios unitarios de estas prestaciones. De otro lado, también destaca el hecho de que el precio total del contrato se haya fijado previamente, sin conocerse el número y circunstancias de las prestaciones que en definitiva habrían de realizarse a lo largo de su desarrollo, y el que, en cuanto al abono del mismo, se establezca un sistema de pagos a tanto alzado, cuando lógicamente resulta improbable que coincidan económicamente las distintas prestaciones que se realicen cada mes en el desarrollo del contrato, circunstancias todas ellas que plantean dudas sobre la naturaleza contractual de esta figura.*

Subsecretaría del Ministerio de Industria y Energía.- Se ha examinado el contrato relativo a la realización de un "estudio sobre la viabilidad y aplicación de materiales compuestos en la construcción de componentes para embarcaciones" por un importe de 200.000.000 ptas, adjudicado directamente en 17 de Diciembre de 1990 a la empresa "Construcciones Aeronáuticas, S.A.", basándose la improcedencia de promover concurrencia en la oferta en el hecho de "ser la única empresa española con tecnología aplicable a materiales avanzados, capaz de abordar un programa como el exigido".*

Sin embargo, con relación a este contrato se observó, de una parte, que el documento mediante el que se formaliza lleva fecha anterior -14 de Diciembre de 1990- a la de la resolución de adjudicación por el órgano de contratación -la ya indicada de 17 de Diciembre siguiente-, mientras que, por otra parte, se advirtió el escaso tiempo establecido para la ejecución del contrato -de catorce días naturales-, sobre todo en relación con el precio del mismo -superior a 200 millones de pesetas-, habiéndose contestado por el Centro contratante que "durante este corto plazo de tiempo se trabajó muy intensamente (algunos de los documentos incluso se presentaron manuscritos) en todas las áreas objeto de las conclusiones de la memoria", y que este trabajo "era la aplicación en el sector naval de las innovaciones realizadas en el sector aeronáutico, para el cual se debía aprovechar la experiencia de CASA y su conocimiento de las nuevas tecnologías en materiales de construcción".

Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior. Se han examinado dieciséis contratos relativos a la limpieza, desinfección y mantenimiento integral de las Dependencias policiales en distintas provincias, por un importe conjunto de 2.301 millones de pesetas, habiendo sido adjudicados directamente por razones de seguridad, sin ninguna concurrencia de ofertas en cada caso, ni baja alguna. Por otra parte, y particularmente para los contratos de mantenimiento de las instalaciones en la Escuela General de la Policía, sita en Avila, y de la Jefatura Superior de Policía en Sevilla se ha observado que las respectivas fechas de afianzamiento y formalización son anteriores a las de adjudicación del correspondiente contrato.

Instituto Nacional de Cinematografía, del Ministerio de Cultura. Se han examinado dos contratos, relativos a la "promoción del cine español" en los Estados Unidos y Francia respectivamente, por importes de 41.001.243 y 31.318.592 ptas, que fueron adjudicados directamente también por inconveniencia de promover concurrencia en la oferta, ante la necesidad de seleccionar empresas con probada experiencia en el sector y que dominaran tanto el mercado del país en el que se realiza la promoción como el producto a promocionar. Con relación a ellos ha llamado la atención la forma de pago establecida, que prevé abonos al contratista por el 30% y el 50% del precio, respectivamente, " a la firma del contrato", una serie de pagos del 10% durante la vida del mismo, y un 20% a su finalización, en sustitución del afianzamiento. Aunque el Organismo contratante ha manifestado que "las costumbres y normas internacionales del sector cinematográfico exigen inexcusablemente el pago adelantado de parte del precio", parecen excesivas las cantidades satisfechas

al comienzo del contrato y falto de garantías el pago de la casi totalidad del precio, ya que el afianzamiento se pospone a la terminación del plazo de ejecución.

Dirección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas.- Se ha examinado el contrato relativo al "estudio organizativo de las áreas funcionales comunes de cinco Departamentos ministeriales", adjudicado en 23 de Junio de 1990 por 26.516.000 ptas, sin baja alguna, basándose la imposibilidad de promover concurrencia en el hecho de haberse adjudicado en el año anterior un estudio similar a la misma empresa -también directamente, aunque entonces por razones de urgencia, por un importe de 32.412.442 ptas-, una de cuyas fases consistía en la toma de datos en los que se basa este nuevo estudio, y en que el proceso de trabajo supuesto por el primero quedaría detenido si no se procedía de inmediato a esta segunda contratación. Y, aunque las alegaciones explican el hecho de haberse realizado este contrato independiente en cuanto que la necesidad del segundo estudio no fue advertida sino después de concluido su antecedente y cuando no podía procederse ya a la ampliación del mismo; imprevisión que supuso el haberse sustraído de la concurrencia, aún limitada, promovida en la primera contratación, este segundo estudio, que supuso un incremento del 81,80% respecto del presupuesto primitivo.*

V.4.2.2.- Razones de urgencia

De menor importancia que la anterior causa de adjudicación directa en los contratos de asistencia técnica, deben también recordarse aquí las observaciones formuladas para el contrato de obras, en cuanto a la necesidad de prevenir las adjudicaciones con tiempo suficiente para permitir su contratación mediante un sistema de concurrencia general y de buscar la pronta realización de los contratos en su rápida ejecución más que en la forma de adjudicación.

Entre los contratos de asistencia técnica adjudicados directamente por esta causa que han sido examinados se destacan los siguientes:

Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas. Se han examinado veintiséis contratos relativos a la asistencia técnica al control y vigilancia de obras cuya adjudicación se encontraba próxima, justificándose la urgencia por esta circunstancia y no habiéndose procedido a la contratación de la asistencia técnica hasta conocerse el contratista de la ejecución, a fin de asegurarse de que ambas recaían en empresas independientes.

Secretaría General de Turismo,del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Se han examinado diez contratos referentes a la promoción turística de España en distintos países del extranjero, por un importe conjunto de 1.450 millones de pesetas. Sin embargo, con relación a los mismos se observó que, refiriéndose a campañas a realizar durante el ejercicio de 1990 y habiéndose adjudicado en los primeros días del mismo, sus respectivos expedientes se habían iniciado ya en el mes de Julio del año anterior, por lo que resulta que hubo tiempo suficiente para haber convocado el oportuno concurso, sistema que a la generalidad de su publicidad y concurrencia une una discrecionalidad en la adjudicación similar a la de la contratación directa; opinión igual a la sustentada por la Intervención Delegada, que en su informe sobre control financiero recomienda que estas campañas se contraten por concurso, ya que las mismas se realizan todos los años, siendo en consecuencia fácilmente previsibles.

Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, hoy integrado en el Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Se han examinado dos contratos relativos respectivamente al "diseño y planificación de la organización" y a los "procedimientos " del nuevo Ente público, adjudicados directamente por razones de urgencia en 14 y 17 de Diciembre de 1990 por importes de 99.250.000 y 59.200.000 ptas, y cuyos estudios debían estar concluidos antes del fin del indicado año. Llama la atención el que el primero de dichos contratos aparezca concluido en 28 de Diciembre de 1990 -esto es a los catorce días de su adjudicación, a pesar de su elevado importe-, mientras que el segundo fuera suspendido temporalmente del 29 de Diciembre de 1990 al 5 de Agosto de 1991, "dada la falta de información requerida para el trabajo" -circunstancia que choca con su alegada urgencia-, recibiéndose su objeto en 25 de Septiembre siguiente, con casi nueve meses de retraso respecto de la fecha inicialmente prevista.

Dirección General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.- Con relación a la "campaña de publicidad de señalización de cursos del Plan de Formación e Inserción profesional" se han examinado dos contratos referidos respectivamente a publicidad "exterior" e "interior"; ambos adjudicados directamente por razones de urgencia a la misma empresa, por importes de 59.600.000 y 79.600.000 ptas, basándose dicha urgencia en que "en algunos casos habían ya comenzado los cursos anunciados o iban a empezar en breve plazo" y en "no haberse dispuesto con tiempo suficiente de la información de Ministerio y de las Corporaciones locales sobre los convenios cursos a impartir" -de donde se desprende una ausencia planificación en la organización de los cursos, que repercuti en la contratación de su publicidad-. Respecto de dicha campañ destaca, en primer lugar, su fraccionamiento en dos contrat os distintos, cuando se solicitaron ofertas a las mismas empresas, resultando igual adjudicatario; mientras que, por otra parte, en cuanto a la promoción de concurrencia, realizada según el Centro "de forma verbal, telefónica o personalmente", resultó muy limitada en sus efectos, ya que solo se presentaron proposiciones por la empresa que resultó adjudicataria y por otras dos que, por no estar clasificadas, no podrían celebrar validamente contratos con la Administración. Finalmente, debe también advertirse que en estos contratos se establecen sendos pagos al contratista de un 40% de su precio "a la firma del contrato"; pagos que contravienen lo dispuesto por el art. 12 de la Ley de Contratos del Estado, en cuanto que en el mencionado momento no se ha realizado ninguna prestación abonable por el contratista. Consideraciones todas ellas que no resultan desvirtuadas por las alegaciones remitidas sobre este punto.*

Direcciones Generales de Servicios de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Asuntos Sociales, e Institutos de la Mujer y de la Juventud.- Con relación a la campaña publicitaria "recomendando el uso del preservativo como forma de prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual", que fue llevada en colaboración por los Centros y Organismos indicados tanto por motivos presupuestarios, ya que su coste excedía de las posibilidades de cada uno de ellos, como por razones competenciales, ya que afectaba a aspectos sanitarios y sociales, se han examinado cinco contratos por un importe de 560 millones de pesetas.

Su primera actuación fue el contrato celebrado por el Ministerio de Sanidad y Consumo referente a la creatividad de la campaña así como a la compra de espacios en los canales nacionales de TVE, adjudicado directamente por razones de urgencia por 239.873.741 ptas, en contra de la opinión de su Asesoría jurídica que criticaba la mencionada urgencia determinante de la contratación directa. Por su parte, los Instituto de la Mujer y de la Juventud adjudicaron también directamente a la misma empresa adjudicataria del contrato anterior, por haberse encargado de la creatividad de la campaña, la publicidad a través de cabinas telefónicas, vallas de Metro, marquesinas de autobuses, anuncios en prensa nacional, folletos, adhesivos y chapas, mediante sendos contratos por importes de 78.773.800 y 58.951.200 ptas; al tiempo que el Ministerio de Asuntos Sociales adjudicó a otra empresa distinta, mediante concurso público y por 145.561.344 ptas la publicidad en vallas y en televisiones autonómicas y privadas, por entender que la difusión de la creatividad elaborada por el primer adjudicatario podía realizarse por cualquier otra empresa. Finalmente, y constatado que no se había realizado ninguna campaña por "radio", se contrató ésta, directamente y por razones de urgencia, por el Ministerio de Sanidad con la adjudicataria de contratos anteriores, por 66.465.353 ptas, después de consultada esta empresa y otras dos que no estaban clasificadas para contratar con el Estado. De donde resulta, en conclusión, que en esta campaña se produjeron adjudicaciones directas en favor de una misma empresa por un importe total de 444.064.090 ptas.

Dirección General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía y Hacienda. Con objeto de atender durante el primer trimestre del ejercicio de 1990 a la publicidad de los distintos instrumentos financieros emitidos por el Tesoro, se prorrogaron por el mencionado período las campañas contratadas en el año anterior; pero sin que se hayan enviado a este Tribunal las solicitadas certificaciones relativas a la identidad de las prestaciones establecidas en los contratos primitivos con las realizadas en sus prórrogas y entre los precios correspondientes, limitándose las alegaciones a afirmar que "en las resoluciones del órgano de contratación se establece claramente que, en todo caso, la ejecución de los contratos quedará supeditada a lo que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas de los contratos primitivos". Por lo demás, ante el informe negativo del Servicio jurídico respecto de la posibilidad de una nueva prórroga para el segundo trimestre del ejercicio, se adjudicaron directamente, por razones de urgencia, cinco contratos a los adjudicatarios de los contratos anteriores por un importe conjunto de 1.059 millones de pesetas. Después de celebrados los correspondientes concursos por las campañas del segundo semestre del ejercicio -que fueron estudiados en el epígrafe V.4.1-, se volvieron a adjudicar, directamente y también por razones de urgencia -indicando las alegaciones la necesidad de haberlas realizado en el momento respectivamente oportuno, pero sin justificar la imposibilidad de soportar la pequeña dilación que puede suponer la adjudicación por concurso respecto de la contratación directa, en los supuestos normales-las campañas relativas a la "Primera emisión de Bonos del Estado en ecus" y a los "Fondos Fondtesoro" a una de las empresas adjudicatarias de contratos anteriores, que ha venido a acumular siete adjudicaciones por un importe de 2.969 millones de -pesetas, además de las prórrogas por el primer trimestre del ejercicio -número de adjudicaciones e importe acumulado que las alegaciones consideran "puramente circunstancial"-.*

VI.- UNIVERSIDADES QUE PERMANECEN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ESTADO

ÍNDICE

VI.1 INTRODUCCIÓN
VI.1.1. Ámbito de fiscalización
VI.1.2. Objetivos de fiscalización

VI.2. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

VI.2.1. Estructura, presentación, autorización y aprobación de las cuentas

VI.2.2. Contabilidad presupuestaria

VI.2.3. Contabilidad financiera y patrimonial

VI.2.4. Cuentas no incluidas en la fiscalización del ejercicio 1989 y anteriores

VI.1.- INTRODUCCIÓN

En este apartado del Informe se analizan las cuentas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y las del resto de las Universidades públicas que figuran como de competencia de la Administración del Estado en la Ley de Presupuestos Generales para 1990, al no haber asumido las Comunidades Autónomas en las que se ubican las competencias previstas en la Ley de Reforma Universitaria (LRU).

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo continúa integrada como Organismo autónomo en la Cuenta General del Estado, al mantenerse pendiente de determinar su régimen jurídico por las Cortes Generales según la disposición adicional segunda de la LRU.

El resto de las Universidades públicas radican en Comunidades Autónomas que tienen órganos de control externo propios a los que han de rendir sus cuentas.

Las Universidades, como Entes Públicos, están sometidos a la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, según dispone el artº. 34 de la LFTCu.

Estas Entidades, ante la falta de disposiciones específicas en la LRU y en los correspondientes Estatutos, deben rendir sus cuentas al Tribunal en el plazo de dos meses contados a partir del cierre de cada ejercicio según lo establecido en el artículo 35.2 de la LFTCu[1]. Dicho plazo deberá contarse, en su caso, a partir de la fecha prevista para la aprobación interna de las cuentas por la propia Universidad.

La LRU, en sus artículos 54.5 y 56.1, establece que las Universidades organizarán sus cuentas bajo principios de una contabilidad presupuestaria, patrimonial y analítica, debiendo adaptarse en la estructura de sus presupuestos y en su sistema contable a las normas que con carácter general estén establecidas en el sector público a efectos de normalización contable.

A este respecto cabe destacar que aún en 1990, cinco Universidades de las trece que han rendido cuentas siguen sin presentar estados contables sobre su situación financiera y patrimonial.

VI.1.1.- ÁMBITO DE FISCALIZACIÓN

Comprende la cuenta de liquidación de la UNED, Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, Baleares, Cantabria, Carlos III, Castilla-La Mancha, Complutense de Madrid, Extremadura, León, Murcia, Oviedo, Politécnica de Madrid, Salamanca, Valladolid y Zaragoza.

A la fecha en que finaliza la presente fiscalización y a pesar de su requerimiento de forma expresa e individualizada, no se han rendido y, en consecuencia no han podido ser fiscalizadas, las cuentas del ejercicio 1990 correspondientes a las Universidades de Castilla-La Mancha, León y Politécnica de Madrid.

VI.1.2.- OBJETIVOS DE FISCALIZACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en las Leyes Orgánica y de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas se han establecido como objetivos generales del examen y comprobación de las cuentas rendidas por las Universidades, los siguientes:

VI.1.2.1.- En cuanto a la presentación de las cuentas

a) Comprobar que las cuentas rendidas están aprobadas por los órganos competentes de las Universidades de acuerdo con lo establecido en los correspondientes Estatutos.

b) Comprobar si existe coherencia interna entre los saldos de las partidas integrantes de las cuentas que deben estar correlacionados y si dichos saldos están debidamente soportados por la documentación que acredite su importe.

c) Comprobar si se han respetado y aplicado de manera uniforme los principios generales que inspiran la contabilidad presupuestaria, a fin de conseguir que las cuentas rendidas representen adecuadamente la ejecución de los presupuestos.

d) Comprobar, en la medida de lo posible[2], que las cuentas rendidas presentan razonablemente la situación financiera y patrimonial y el resultado de las operaciones del ejercicio.

VI.1.2.2.- En cuanto a la ejecución de sus presupuestos

a) Analizar el grado de realización de la liquidación de las principales partidas correspondientes a la ejecución presupuestaria.

b) Analizar las variaciones más significativas que han tenido lugar en las liquidaciones presupuestarias del ejercicio fiscalizado.

La presente fiscalización se ha realizado mediante examen de los estados financieros rendidos y de los anexos y documentación complementaria que los acompañan.

VI.2.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

VI.2.1.- ESTRUCTURA, PRESENTACIÓN, AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

Sobre estos aspectos son destacables las siguientes observaciones:

a) Las Universidades presentaron sus cuentas del ejercicio bajo principios de contabilidad financiera, patrimonial y presupuestaria, con las excepciones de Baleares, Complutense de Madrid, Extremadura, Murcia y Valladolid que sólo presentan la liquidación de los presupuestos en estados adaptados en líneas generales a lo establecido para los Organismos autónomos administrativos antes de la implantación en estos Entes del Plan General de Contabilidad Pública.

La rendición de cuentas al Tribunal, se ha efectuado con un retraso para la mayoría de las Universidades de aproximadamente un año, respecto de los plazos fijados en el artículo 35.2 de la LFTCu.

b) No existe uniformidad en el tratamiento seguido por las Universidades para la autorización y aprobación de cuentas. En general la autorización se acredita con la firma del Jefe de Contabilidad, Rector o Vicerrector de Asuntos Económicos, si bien en Alcalá de Henares firma también el Gerente, y en la Complutense de Madrid y Cantabria, el Interventor interno. Respecto de la aprobación de la gestión económica por órganos propios de la Universidad cuando los Estatutos la prevén, la heterogeneidad se muestra tanto en los documentos que deben someterse a aprobación, como en el órgano competente para realizarla.

No se presenta documento alguno que acredite la aprobación de las cuentas rendidas por la Universidad Autónoma de Madrid y la de Extremadura. De acuerdo con las alegaciones formuladas por la Universidad Autónoma de Madrid, los datos económicos, o Memoria anual en los términos del artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, se someten a la aprobación del Consejo Social. Sin embargo, no se aporta el correspondiente certificado aprobatorio de dicha Memoria, la cual ha de comprender las cuentas anuales que por sí mismas deben constituir su núcleo fundamental. La referencia de las alegaciones a la acreditación de cuentas conforme al artículo 128 del TRLGP no puede considerarse suficiente, dada la actual configuración jurídica de las Universidades.*

Algunas Universidades han remitido con posterioridad a la rendición de sus cuentas -concretamente en la fase de alegaciones- certificados de la aprobación de aquéllas por los Órganos que, según sus Estatutos, son los competentes. Debe subrayarse que tal aprobación debe acreditarse documentalmente en la remisión inicial de las cuentas.*

En la cuenta rendida por la Universidad Carlos III se adjunta informe de auditoría encargado por la Universidad a una firma privada. En dicho informe se proponen diversos ajustes a las partidas que integran los estados financieros que, si bien individualmente tienen una cierta materialidad, no tienen efecto significativo sobre los estados financieros rendidos, considerados en su conjunto. Estos ajustes se encuentran pendientes de asumir por los órganos competentes de la Universidad.

VI.2.2.- CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

VI.2.2.1.- Examen de los estados financieros de la liquidación del presupuesto

A) De la documentación examinada correspondiente al ejercicio 1990 se desprende que, en todas las Universidades fiscalizadas, los datos incluidos en los estados rendidos son internamente consistentes, están soportados por documentación acreditativa suficiente y presentan adecuadamente la liquidación del presupuesto para cada Entidad del ejercicio fiscalizado, con las salvedades que se expresan a continuación:

a) Operaciones no incluidas en las cuentas rendidas

En la cuenta de la Universidad Complutense de Madrid, continúan sin incluirse las operaciones realizadas por el Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho.

Las Universidades de Murcia y Baleares no reflejan en sus presupuestos las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros a corto plazo, sin que las razones alegadas por esta última Universidad sean suficientes para justificar tal omisión. Como se indica posteriormente, el saldo de estas inversiones al

[1] El artículo 35.2 de la LFTCu establece: "Las cuentas generales y parciales que hayan de remitirse al Tribunal por otros conductos, deberán estar en poder del mismo en los plazos que las disposiciones respectivas determinen o dentro de los dos meses siguientes a la terminación del periodo que a cada una corresponda cuando no exista previsión legal al respecto".

[2] Algunas cuentas de las Universidades no incluyen estados financieros debidamente configurados para presentar dicha situación y resultados, como expresamente se hace constar en el apartado VI.2.3 de este informe.

cierre del ejercicio asciende a 1.500 y 1.140 millones de pesetas, respectivamente.*

b) Remanentes de Tesorería

Las previsiones definitivas de los remanentes de tesorería de las Universidades Complutense de Madrid y Oviedo son superiores a los remanentes reales existentes al cierra del ejercicio anterior en 211 y 12 millones de pesetas respectivamente, lo que ha supuesto la aplicación como fuente de financiación del presupuesto de remanentes de tesorería ficticios por los importes indicados.

No se aceptan las alegaciones de la Universidad Complutense a este punto (en las que, por cierto, aparece transcrito con erratas el texto del Informe), porque la anulación de obligaciones realizada el 10/12/90 a las que se hace referencia en ellas, constituye una operación propia del ejercicio 1990 que no incide en la cuantía del remanente de tesorería a 31/12/89 al que se hace referencia en el Informe, siendo criterio de este Tribunal que sólo el remanente de tesorería existente al final de un ejercicio es susceptible de ser considerado como fuente de financiación, por tal concepto, del presupuesto de gastos del ejercicio siguiente.*

En el resto de las Universidades analizadas las previsiones definitivas coinciden con los remanentes reales, con la excepción de Alcalá de Henares en la que la previsión resulta inferior en 58 millones de pesetas. Diferencia a la que habría que añadir 9 millones de pesetas, que constituyen el importe a incrementar en el remanente de tesorería del ejercicio anterior a fin de corregir errores en su cálculo, derivados de la no inclusión de rectificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados.

c) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

c.1) Algunas Universidades han contabilizado ingresos y gastos de naturaleza presupuestaria en cuentas extrapresupuestarias que en algunos casos no han sido formalizados a presupuesto al cierre del ejercicio. Destaca a este respecto el mantenimiento como deudores extrapresupuestarios de gastos de personal, anticipos y préstamos varios por importes de 189 millones de pesetas en la UNED y 168 millones en Oviedo, y especialmente en la Complutense de Madrid con 1.492 millones de pesetas de anticipos de retribuciones al personal, y 2.667 millones de "Anticipos provisión de fondos de carácter transitorio".

Otras universidades, Oviedo y Carlos III, han realizado inversiones financieras a corto plazo a través de operaciones extrapresupuestarias por importes de 724 y 144 millones de pesetas, respectivamente.

c.2) Existen saldos significativos registrados como "Partidas pendientes de aplicación", de los que se desconoce su imputación definitiva, en ingresos en la Universidad Complutense de Madrid por importe de 141 millones de pesetas, y en pagos en la Universidad de Zaragoza por 150 millones.

d) Defectos de justificación, deficiencias y descuadres contables

d.1) Defectos de justificación

- La Universidad de Zaragoza no aporta las relaciones de ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios que permitan contrastar los importes ofrecidos en la cuenta rendida.

- Esta Universidad no presenta igualmente la relación nominal de acreedores y deudores extrapresupuestarios, ni la de deudores de presupuestos cerrados, relación esta última que tampoco es aportada por la Universidad de Oviedo.

- Por otra parte, la Universidad de Alcalá de Henares no ha remitido la relación nominal del concepto de acreedores extrapresupuestarios "Otros acreedores no presupuestarios".

d.2) Descuadres contables y otros defectos

- La Universidad de Valladolid no incluye en sus saldos contables de tesorería depósitos para créditos documentarios constituidos en una cuenta corriente en la banca privada, por importe de 18 millones de pesetas.*

- Las Universidades de Baleares y Murcia registran como saldo de efectivo en cuentas de la banca privada, inversiones realizadas en activos financieros. Al cierre del ejercicio éstas inversiones ascendían aproximadamente a 1.140 y 1.500 millones de pesetas, respectivamente.

- En la Universidad de Murcia en el capítulo 6, se produce un error en la incorporación de remanente de crédito, que excede en 261 millones de pesetas a los incorporables procedentes del ejercicio anterior. De las explicaciones dadas por la Universidad, se deduce que el correspondiente expediente de modificación, debería haber consistido en una ampliación de crédito financiado con remanente de tesorería.

B) Como consecuencia de lo señalado en apartados anteriores, los resultados de la gestión presupuestaria o remanente presupuestarios presentados en cuentas no se ajustan a la realidad en algunas Universidades, particularmente en las siguientes:

- En la UNED se encuentran disminuidos en 33 millones de pesetas, resultado neto de la regularización a presupuesto de los saldos de gastos de personal extrapresupuestarios del ejercicio anterior y de la aplicación a extrapresupuestarios de gastos de personal del ejercicio corriente (222 y 189 millones respectivamente).

- En la Complutense de Madrid se encuentran aumentados en 1.819 millones de pesetas que corresponden a la variación anual positiva del saldo del concepto "Anticipos provisión de fondos de carácter transitorio". Asimismo el resultado se encuentra incrementado en 400 millones de pesetas más, correspondientes al aumento neto del ejercicio de los anticipos por retribuciones al personal registrados extrapresupuestariamente.

- En Oviedo se encuentran disminuidos en un importe neto de 82 millones de pesetas, que corresponden a 250 millones de retribuciones de profesorado y tribunales de 1989 regularizados a presupuesto de 1990, que deben minorarse en 168 millones de nóminas de profesorado, funcionarios, tribunales y préstamos concedidos en 1990, registrados extrapresupuestariamente.

VI.2.2.2.- Análisis de ejecución presupuestaria

En este apartado se procede al análisis de las cuentas rendidas con el objetivo de evaluar la calidad de la presupuestación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la LOTCu. Se estructura en tres apartados, el primero dedicado al presupuesto de gastos realizándose análisis separados de las modificaciones de crédito y de la ejecución de los créditos; en el segundo se analiza el presupuesto de ingresos; y en el tercero se presentan los resultados del ejercicio atendiendo a la naturaleza económica de los gastos e ingresos.

En los anexos VI-1, VI-2, VI-3.1 y VI-3.2 se detalla la ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos.

A) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

La LRU establece en su art. 55 que todos los créditos tienen la consideración de ampliables, excepto el de la mayor parte de los conceptos retributivos de la plantilla de funcionarios docentes y el de la plantilla de funcionarios no docentes.

El importe total de las modificaciones netas de crédito de las Universidades asciende a 31.386 millones lo que supone un 26,7% de incremanto sobre los créditos iniciales.

Por capítulos, las modificaciones netas más significativas se producen en el capítulo 6 "Inversiones reales", ascendiendo a 18.829 millones lo que supone un 85,4% sobre los créditos iniciales. Estas modificaciones responden principalmente a incorporaciones de crédito del ejercicio anterior, cuyo importe representa al igual que en los ejercicios anteriores más del 50% de las modificaciones.

En términos absolutos las modificaciones netas más elevadas se producen en la Universidad Complutense de Madrid (12.682 millones), Universidad de Zaragoza (2.845 millones), Universidad de Valladolid (2.841 millones), Universidad de Murcia (2.425 millones) y Universidad de Salamanca (2.347 millones). En términos relativos sobre los créditos iniciales, en las Universidades Complutense de Madrid (49,7%), Baleares (45,9%), Murcia (32,4%) y Extremadura (30,4%).

Sin embargo, respecto de las modificaciones netas de la Universidad Complutense de Madrid, es necesario aclarar que se realizan sobre el presupuesto prorrogado de 1989 que es el que figura en la cuenta rendida. El presupuesto de 1990 se aprobó el 21 de diciembre de dicho año. Considerando como créditos iniciales los de este presupuesto, la cifra de las modificaciones netas asciende a 5.973 millones de pesetas.

Por otra parte, la comparación de las modificaciones de crédito con los remanentes de crédito pone de manifiesto, para el conjunto de las Universidades, que el importe de éstos es en general superior al 50% de aquéllas salvo en la Universidad de Salamanca donde sólo importan un 20%.

En las Universidades de Alcalá de Henares, Baleares, Autónoma de Madrid, Carlos III, Cantabria y Oviedo llegan incluso a superar el 100%.

En las Universidades Complutense de Madrid y Oviedo se ha producido financiación ficticia de modificaciones de crédito vía remanente de tesorería inexistente, por las razones e importes expresados en el apartado VI.2.2.1.A.b).

b) Ejecución de créditos

Las obligaciones reconocidas para el conjunto de las Universidades ascendieron a 125.520 millones de pesetas y los créditos finales de 148.920 millones, cifras de las que se derivan unos remanentes de crédito de 23.400 millones y un nivel de ejecución del 84,3%.

Por capítulos las mayores desviaciones relativas (remanentes de crédito sobre créditos finales) se producen en el correspondiente a inversiones reales con un porcentaje del 46%.

Por Universidades, aunque las desviaciones absolutas más elevadas corresponden a la Complutense de Madrid (6.043 millones), Autónoma de Madrid (2.822 millones), Zaragoza (2.646 millones) y Valladolid (2.049 millones), las desviaciones relativas más importantes corresponden a Carlos III (49,2%), Baleares (33,7%) y Cantabria (20,7%).

Por clasificación económica son los gastos de personal los más significativos con obligaciones reconocidas de 82.489 millones de pesetas (65,7 % del total), seguidos por las del capítulo 6 "Inversiones Reales" con 22.114 millones (17,6 %) y las del capítulo 2 "Gastos de bienes corrientes y servicios" con 18.958 millones (15,1 %).

Por Universidades, los límites de variación porcentual de la participación de los gastos de personal en los gastos totales oscilan entre el 72% en la Complutense de Madrid y el 49% en la Carlos III.

Los gastos del capítulo 6 "Inversiones reales" frente a los gastos totales por Universidades, porcentualmente oscilan entre el 24% de Baleares y el 11,5% de la UNED, siendo este capítulo el que presenta mayor desviación sobre los créditos definitivos, lo que origina el bajo nivel de ejecución (en torno al 54%). Las causas aducidas sobre la situación son las siguientes:

- Retraso en la percepción de las transferencias destinadas a inversiones e investigación por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.

- Imposibilidad de realización de proyectos cuya ejecución depende de la conclusión de otros.

- Retrasos en la iniciación de proyectos cuya aprobación corresponde a Órganos de la Administración del Estado distintos de las Universidades.

Las variaciones interanuales (obligaciones reconocidas en un año respecto a las del anterior) son positivas en 24.466 millones de pesetas lo que representa un incremento relativo del 24,21%.

En cuanto a las variaciones absolutas más destacadas correspondieron a las Universidades Complutense de Madrid, Zaragoza, Salamanca y Valladolid con 5.108, 2.599, 2.596 y 2.389 millones de pesetas, mientras las mayores variaciones relativas correspondieron a las Universidades de Carlos III, Alcalá de Henares y Murcia con el 665%, 34% y el 33%. La Universidad Carlos III inició sus actividades docentes en el curso 1989-1990, lo que supuso que la cuenta de liquidación de 1989 correspondiera únicamente a los tres últimos meses del ejercicio.

B) Presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos del conjunto de Universidades asciende a 130.071 millones de pesetas en 1990, para unas previsiones finales (sin incluir el remanente de tesorería) de 129.983 millones de pesetas, cifra que determina un nivel de ejecución del 100% aproximadamente.

Las transferencias corrientes suponen la partida más significativa del total de ingresos con 79.724 millones de pesetas, lo que supone un 61,3% del total ingresos.

En segundo lugar figuran los derechos reconocidos por tasas y otros ingresos con 28.644 millones de pesetas y un 22% de los ingresos totales.

Los derechos reconocidos en relación a los del ejercicio anterior ofrecen una variación absoluta positiva de 24.943 millones de pesetas (23,7%). El crecimiento porcentual de los derechos reconocidos para cada Universidad oscila desde el 9,6% en Zaragoza al 34,4% en Alcalá de Henares, a excepción hecha de la Carlos III donde alcanza un 1.011,5% debido a las razones expuestas en el apartado VI.2.2.2.A.b).

C) Resultados de gestión presupuestaria o Remanentes Presupuestarios

Los presupuestos de todas las Universidades fiscalizadas se presentaron equilibrados, es decir, los ingresos y gastos totales previstos eran coincidentes, o lo que es lo mismo, se preveía un remanente presupuestario nulo. No obstante, a nivel agregado, los remanentes presupuestarios reales fueron los siguientes (en millones de pesetas):

OPERACIONES	SUPERÁVIT (DÉFICIT) 1.990
Corrientes	6.304
Capital	<1.702>
Financieras	<51>
TOTALES	4.551

Todas las Universidades, según las cuentas rendidas, presentan superávit, excepto las de Cantabria, Zaragoza y Salamanca. De acuerdo con lo indicado en el apartado VI.2.2.1.B), los remanentes presupuestarios de las Universidades Complutense de Madrid, UNED y Oviedo que figuran en el anexo VI-1 deberían ser corregidos en los importes que se mencionan en dicho apartado.

D) Evaluación de la ejecución presupuestaria

De los datos expuestos en los apartados A), B) y C) anteriores se extraen las conclusiones siguientes:

a) La incorrecta presupuestación del capítulo 6 "Inversiones reales" es la causa fundamental de los elevados porcentajes de modificaciones y desviaciones puestas de manifiesto; por ello, la dotación de tales créditos de acuerdo con las posibilidades reales de su gestión -o alternativamente la agilización de ésta- evitaría los crecientes remanentes e incorporaciones de crédito, y en consecuencia, reduciría dichos porcentajes.

b) Las modificaciones de crédito no siempre satisfacen las condiciones de urgencia y necesidad, por lo que con frecuencia quedan sin ejecutar en todo o en parte. Las modificaciones de crédito deben aprobarse solo y en la cuantía que sea necesaria para dar cobertura a gastos que deban realizarse dentro del propio ejercicio.

VI.2.3.- CONTABILIDAD FINANCIERA Y PATRIMONIAL

En los anexos del VI-4.1 al VI-4.8 se recogen de forma resumida los balances de situación y las cuentas de resultados rendidos por las Universidades que presentan este tipo de contabilidad en el ejercicio 1990 y que son las siguientes: Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, Carlos III, Cantabria, Oviedo, UNED, Salamanca y Zaragoza.*

El resto de las Universidades (Baleares, Complutense de Madrid, Extremadura, Murcia y Valladolid) no rinden estados de contabilidad financiera y patrimonial a pesar de lo establecido en los art. 54.5 y 56.1 de la LRU.

Como resultado de la fiscalización efectuada sobre los estados financieros rendidos, se ha puesto de manifiesto una serie de salvedades significativas que afectan a su presentación y a la representación que de la situación financiera y patrimonial deben reflejar dichos estados, de acuerdo con los criterios y principios que inspiran la contabilidad pública.

A continuación se describen estas salvedades y su efecto sobre las distintas partidas del balance de situación y la cuenta de resultados.

VI.2.3.1.- Balances de situación

A) Inmovilizado

a) Las Universidades de Alcalá de Henares y Salamanca no incluyen en sus balances los inmovilizados adquiridos con anterioridad a la implantación de la contabilidad patrimonial.

La Universidad de Cantabria aflora en este ejercicio parte de las inmovilizaciones adquiridas hasta el 31 de diciembre de 1987, por importe de 12.544 millones de pesetas, sin incluir la valoración de los "terrenos y bienes naturales" y los "fondos bibliográficos".

La Universidad de Zaragoza continúa sin asignar valor alguno a sus bienes muebles. Por otra parte la Universidad Autónoma de Madrid ha procedido a la valoración de este tipo de inmovilizados, por importe de 1.228 millones de pesetas. Asimismo ha efectuado una regularización del resto de los valores del inmovilizado material que determina una reducción neta sobre los valores contabilizados en 1.988, de 288 millones de pesetas.

La Universidad Carlos III que entró en funcionamiento en el curso 1989-1990 procedió a la valoración del inmovilizado preexistente en su constitución en 1990 por importe de 3.951 millones de pesetas.

Los criterios seguidos para valorar los activos aflorados en este ejercicio han sido el del coste de adquisición por las Universidades de Carlos III y de Cantabria, exceptuado para esta última el valor de los edificios y otras construcciones al que se asigna de forma estimada un importe de 90.000 Ptas/m2. Para la Universidad Autónoma de Madrid los valores contabilizados corresponden a una tasación pericial efectuada.

b) Los incrementos del inmovilizado del ejercicio incluyen, en ocasiones, adquisiciones realizadas a través del capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" que, en general, se corresponden con adquisiciones de libros y mobiliario diverso, que puede tener la condición de inventariable. Como caso más significativo destaca la UNED que ha activado 66 millones de las adquisiciones efectuadas por medio del capítulo 2.

Las Universidades Autónoma de Madrid, Cantabria, Oviedo, Zaragoza y Carlos III no inmovilizan la totalidad de obligaciones reconocidas por el capítulo 6, aplicando la diferencia a gastos de explotación y a partidas pendientes de aplicación por los siguientes importes (en millones de pesetas).

UNIVERSIDAD	TOTAL CAP.6	APLIC.A INMOV.	GASTOS DE EXPLOTAC.	PTES. APLICAC.
Autónoma	2.074	1.275	626	173
Cantabria	1.034	790	244	-
Oviedo	1.563	1.206	357	-
Carlos III	202	175	27	-
Zaragoza	2.323	1.660	663	-

Una parte significativa de los gastos del capítulo 6, considerados como de explotación, corresponden a gastos de investigación no activados, como se pone de manifiesto en el epígrafe d) siguiente.

c) Los valores del inmovilizado se presentan sin deducción de las correspondientes amortizaciones, que no han sido dotadas, salvo en la Universidad Carlos III y la Autónoma de Madrid.

d) Gastos de investigación activados

En las Universidades de Alcalá de Henares, Salamanca, Zaragoza y UNED se utiliza el subgrupo contable de inmovilizado inmaterial que corresponde, en general, a los gastos de "Investigación y desarrollo" (I+D) incluidos presupuestariamente dentro del capítulo 6. Los criterios de imputación de este tipo de gastos varían, así en 1990:

- La UNED de un montante de 521 millones de pesetas presupuestados en I+D activa como inmaterial 218, y el resto como inmovilizado

material al considerar que por su naturaleza se adecúa a dicho activo. En el mismo sentido, Alcalá de Henares de un total de 457 millones activa como inmaterial 185 millones considerando el resto como inmovilizado material.

- La Universidad de Salamanca activa como inmaterial la totalidad de este tipo de gastos (875 millones).

- La Universidad de Zaragoza de un total de 1.083 millones activa como inmovilizado inmaterial 420 millones aplicando la diferencia a resultados.

El importe del inmovilizado inmaterial contabilizado en el balance de 31 de diciembre de 1990 en las Universidades reseñadas es el siguiente: UNED, 861 millones lo que supone un 12,36% del inmovilizado total, Alcalá de Henares, 625 millones, y 23%, Salamanca, 2.061 millones, y 41% y Zaragoza, 1.472 millones, y 7,3%.

El resto de las Universidades analizadas no presentan la partida inmovilizado inmaterial procediendo con los gastos de investigación y desarrollo a activarlos como inmovilizado material o a imputarlos como resultados de explotación según el criterio de cada una.

Como norma general los gastos de investigación y desarrollo deben imputarse a resultados del ejercicio en el que se producen, salvo que pueda acreditarse que concurren diversas circunstancias que permiten su activación, hecho éste no manifestado por ninguna de las Universidades, lo que normalmente da lugar a que exista en los respectivos balances activos ficticios, cuya cuantía se incrementa notablemente en cada ejercicio, pudiendo desvirtuar la imagen de la situación patrimonial que debe representar el Balance.

B) Cuentas financieras

Comprende las cuentas de tesorería propiamente dichas, caja y bancos, inversiones financieras temporales y partidas pendientes de aplicación.

a) Las cuentas de tesorería incluyen en cuatro Universidades, Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, UNED y Carlos III, saldos por cuentas de pagos a justificar. Las tres últimas aplican correctamente la mecánica contable prevista para este tipo de cuentas reflejando como contrapartida la cuenta de pasivo "Acreedores por pagos en firme y a justificar"; sin embargo, la Universidad de Alcalá de Henares sigue registrando la contrapartida dentro de la cuenta de "Patrimonio", por 59 millones de pesetas.

b) En partidas pendientes de aplicación, la Universidad Autónoma de Madrid mantiene saldos correspondientes a gastos del capítulo 6 del presupuesto, que para mayor flexibilidad se registran a través de esta cuenta, produciéndose su imputación definitiva a gastos o activo fijo en la contabilidad financiera al justificarse los mismos. A 31 de diciembre de 1990 su saldo asciende a 433 millones de pesetas, cuando, para una mayor exactitud de los estados financieros, lo procedente hubiera sido su aplicación definitiva antes del cierre del ejercicio.

C) Subvenciones de capital

Los saldos de estas cuentas siguen sin incluir el importe de las subvenciones percibidas con anterioridad al ejercicio de implantación de la contabilidad patrimonial.

VI.2.3.2.- Examen de las cuentas de resultados

A) Las diferencias más destacables entre la imputación presupuestaria de gastos e ingresos y su registro en la contabilidad financiero-patrimonial, son las siguientes:

a) Existen obligaciones reconocidas en el capítulo 6 "Inversiones Reales" del presupuesto de gastos, que han sido considerados gastos de explotación, con el detalle y para las Universidades a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior de Inmovilizado. Asimismo la UNED ha activado gastos del capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" por un importe de 66 millones de pesetas.

Los diferentes criterios de imputación de gastos por los que se rigen la contabilidad presupuestaria y la financiera o patrimonial pueden originar, sin que esto presuponga un incorrecto tratamiento contable, que determinados gastos de los capítulos 2 y 6 puedan aplicarse a resultados o considerarse como gastos activables.

b) La Universidad Autónoma de Madrid ha aplicado a resultados del ejercicio 18 millones de pesetas, que corresponden a subvenciones corrientes recibidas que debieron imputarse al ejercicio 1989.

Asimismo, en esta misma Universidad ingresos por 27 millones y gastos por el mismo importe registrados en su presupuesto, no han tenido reflejo en la cuenta de resultados.

B) Con excepción de la Universidad Carlos III y la Autónoma de Madrid, el resto no efectúa dotaciones a la amortización de sus activos depreciables.

C) La Universidad de Zaragoza arroja pérdidas de 213 millones de pesetas para el ejercicio 1990, si bien el resultado que figura en balance es positivo por 643 millones de pesetas al estar compensado con beneficios del ejercicio anterior por 856 millones de pesetas.

D) Finalmente debe subrayarse la incidencia negativa que tiene en la representatividad de los resultados el mantenimiento en deudores extrapresupuestarios de gastos de naturaleza presupuestaria por las Universidades en general y por Oviedo y UNED en particular a que se hace referencia en el apartado VI.2.2.1.A.c) anterior.

VI.2.4.- CUENTAS NO INCLUIDAS EN LA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 1989 Y ANTERIORES

En este apartado se recogen los resultados de la fiscalización de las cuentas de liquidación de las Universidades Complutense de Madrid y León, del ejercicio 1989, que no fueron incluidas en el informe correspondiente al haber sido rendidas con un retraso cercano a los dos años desde la fecha de cierre del ejercicio. Asimismo se incluyen los relativos a la Universidad de Murcia para 1987, 1988 y 1989, dado que esta Universidad ha rendido nuevas cuentas en sustitución de las remitidas con anterioridad a este Tribunal, y sobre las cuales no pudo emitirse opinión al haberse presentado con múltiples defectos e insuficiente información.

Los aspectos más significativos puestos de manifiesto en la revisión de las cuentas de las Universidades citadas en el párrafo anterior son los siguientes:

A) La Universidad Complutense de Madrid ha contabilizado ingresos y gastos de naturaleza presupuestaria en cuentas extrapresupuestarias, los saldos más significativos pendientes de formalizar a presupuesto al cierre del ejercicio correspondían a "anticipos provisiones de fondos de carácter transitorio" por 848 millones de pesetas y "anticipos de retribuciones al personal" por 1.092 millones. Por otra parte, al cierre del ejercicio 1989 sigue figurando un saldo de 400 millones de pesetas en la cuenta extrapresupuestaria "transferencia de fondos", que tal como se puso de manifiesto en el informe correspondiente a 1988, responde a existencias de fondos depositados en banca privada que no figuran incluidos en los saldos de tesorería del estado resumen de ingresos y pagos.

B) La Universidad de León no ha remitido las relaciones nominales de acreedores y deudores extrapresupuestarios, ni la relación de ingresos y pagos presupuestarios y extrapresupuestarios, lo que no ha permitido efectuar el oportuno contraste con los correspondientes importes que figuran en la cuenta de liquidación.

C) Universidad de Murcia

a) Ejercicio 1987.*

Suprimido por la aceptación de las alegaciones de la Universidad.

b) Ejercicio 1988.*

En el capítulo 6 se produce un error en la modificación por incorporación de remanentes de crédito, que exceden en 113 millones de pesetas a los incorporables del ejercicio anterior.

c) Ejercicio 1989

No se incluye en el presupuesto las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros a corto plazo. Por otra parte, el saldo de estas inversiones al cierre del ejercicio (487 millones) se registra como existencias de fondos en banca privada.

Seguridad Social

ÍNDICE

I. CALIFICACIÓN GENERAL DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1990.

II. EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
II.1 ASPECTOS GENERALES
II.1.1. Normativa
II.1.2. Estructura y rendición de cuentas
II.2 BALANCE DE SITUACIÓN
II.2.1. Balances integrados
II.2.2. Balance por Entidades
II.3 RESULTADOS DEL EJERCICIO
II.3.1. Resultados por operaciones presupuestarias
II.3.2. Resultados por operaciones extrapresupuestarias
II.4 CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II.4.1. Cuenta de liquidación del presupuesto por Entidades
II.5 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
II.5.1. Balance de situación
II.5.2. Resultados de la gestión
II.5.3. Cuenta de la liquidación del presupuesto
II.6 EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN TRAMITADOS POR LA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

III. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
III.1 CONSIDERACIONES GENERALES
III.1.1. Remisión de los contratos al Tribunal
III.1.2. Datos globales de la contratación administrativa
III.2 CONTRATOS DE OBRAS
III.2.1. Contratos celebrados mediante concurrencia general
III.2.2. Contratos de obras adjudicados directamente
III.2.3. Ejecución de contratos adjudicados en ejercicios anteriores
III.3 CONTRATOS DE SERVICIOS
III.3.1. Contratos de servicios adjudicados mediante concurso
III.3.2. Contratos de servicios adjudicados directamente

III.4 CONTRATOS DE SUMINISTROS
III.4.1. Contratos de suministros adjudicados mediante concurso
III.4.2. Contratos de suministros adjudicados directamente
III.4.3. Ejecución de contratos adjudicados en ejercicios anteriores

III.5 LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
III.5.1. Tesorería General de la Seguridad Social
III.5.2. Instituto Nacional de la Salud
III.5.3. Instituto Nacional de la Seguridad Social
III.5.4. Instituto Nacional de Servicios Sociales
III.5.5. Instituto Social de la Marina

I. CALIFICACIÓN GENERAL DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1990

1º.- ANTECEDENTES

En el ámbito de la Seguridad Social se produjeron en el año 1978 dos hechos de especial relevancia. De una parte, la reforma institucional de la misma por Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre y, de otra, el establecimiento de su control por el Tribunal de Cuentas en virtud del Art. 136.2 de la Constitución Española. La reforma institucional supuso la extinción de Organismos gestores y la creación de otros nuevos con sujeción a principios de solidaridad financiera y unidad de caja, y con una estructura funcional que delimita la gestión de las tres áreas de la seguridad social: prestaciones económicas, asistencia sanitaria y servicios sociales, con criterios de simplificación, racionalización, economía, eficacia y descentralización. En materia de control, la Constitución Española establece que las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El ejercicio de 1978 es el punto de partida en la rendición formal de las cuentas de la Seguridad Social al Tribunal y, consiguientemente, el de inicio por éste de la función fiscalizadora de la Seguridad Social. También dicho ejercicio marca el origen de la situación de falta de aprobación de las cuentas, situación que prosiguió en ejercicios sucesivos hasta el de 1989 inclusive.

En el ejercicio de 1980 se rindieron las cuentas por los Organismos creados al amparo de la mencionada reforma de 1978, sin la existencia del marco contable adecuado a la nueva estructura organizativa. En el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio de 1982 se expresaron por primera vez y de forma global las observaciones formuladas por este Tribunal como calificación desfavorable de las cuentas y balances de la Seguridad Social. En los ejercicios siguientes, 1983 y 1984, se mantuvo tal opinión basándola fundamentalmente en la carencia de documentación que no permitía el conocimiento adecuado de la realidad que se analizaba.

En los ejercicios de 1985 y de 1986 comenzó un cambio significativo, pues como ya se señaló en los Informes correspondientes, se percibió progreso en la cantidad y calidad de la información aportada por la Seguridad Social al Tribunal de Cuentas, lo que permitió a éste profundizar en los análisis practicados y detectar anomalías no observadas con anterioridad.

Ante la situación expuesta de falta de aprobación de las cuentas de la Seguridad Social, y con objeto de proceder a la depuración de los estados financieros de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y a la conciliación de las cuentas que deben reflejar sus relaciones recíprocas, por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 30 de julio de 1987, se constituyó la Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social (ya creada por Resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social de 7 de diciembre de 1984) y se creó un Grupo de Trabajo de apoyo a la misma. Las actuaciones de la Comisión y las del Grupo de Trabajo se insertaban en el objetivo más amplio de conseguir que los procesos contables de la Seguridad Social fuesen un eficaz instrumento para la evaluación de la gestión realizada por ella y para la adopción de decisiones por sus órganos de gestión, así como para la obtención de una información adecuada sobre la utilización por dichos órganos de los recursos de la Seguridad Social.

Las Cortes Generales con fecha 21 de noviembre de 1986 habían adoptado el acuerdo de aplazar la aprobación de las cuentas de la Seguridad Social correspondientes al ejercicio de 1981 y posteriores sometidos a su consideración, hasta que finalizasen los trabajos de la Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social y el Tribunal de Cuentas conociese sus resultados. Estos resultados, que se concretaron en la tramitación de 2.798 expedientes de depuración contable por valor de 156.980 millones de pesetas, fueron analizados por este Tribunal en los Informes Anuales correspondientes, y de forma particular en dos Informes Específicos elaborados por éste a requerimiento de dichas Cortes: Informe Suplementario sobre las actuaciones de la Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social, de fecha 29.5.1991, y Dictamen, de fecha 21.11.1991, sobre el informe definitivo emitido por dicha Comisión y presentado al Tribunal el 3.6.1991, ambos publicados en el Boletín Oficial del Estado de 29 de mayo de 1992.

Las conclusiones de las actuaciones fiscalizadoras practicadas, recogidas en los dos referidos Informes Específicos, ponían de relieve que no se habían conseguido resultados definitivos que permitiesen considerar subsanadas las anomalías expuestas en los Informes Anuales del Tribunal y asimismo ponían de manifiesto la existencia de anomalías en los balances de situación de las Entidades, principalmente en el de la Tesorería General de la Seguridad Social. Estas anomalías se referían fundamentalmente a:

- Falta de documentación justificativa de importantes masas patrimoniales.

- Permanencia en las cuentas de deudores y acreedores de saldos no representativos de derechos realizables y obligaciones exigibles para la Seguridad Social.

- Existencia de numerosas cuentas diversas de carácter transitorio con saldos de importes muy elevados pendientes de conciliación, aplicación finalista o regularización.

- Formalizaciones contables de traspasos a Comunidades Autónomas con importantes defectos y omisiones.

Por otra parte, en ambos Informes se ponía también de manifiesto la importancia de las tareas pendientes de acometer por la Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social, a la vez que se formulaban las recomendaciones necesarias para subsanar las deficiencias apreciadas.

2º.- ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA CONGRESO-SENADO PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE 12 DE MAYO DE 1992[1].

A partir de los repetidos Informes Específicos, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por Resolución de 12 de mayo de 1992 (B.O.E. de 29 de mayo) acordó requerir al Gobierno para que llevara a cabo una serie de actuaciones en relación con las cuentas de la Seguridad Social, instando al Tribunal de Cuentas para que incorporase en el Informe Anual que proceda la propuesta de calificación de las mismas en relación con los ejercicios pendientes de aprobación.

En cumplimiento del requerimiento de las Cortes, la Seguridad Social ha llevado a cabo diversas tareas relativas a análisis de cuentas, formación de inventarios, reconstrucción de operaciones en determinadas masas patrimoniales, correcciones contables etc., que en algunos casos han supuesto el logro de los objetivos previstos y en otros el establecimiento de bases suficientes para su consecución.

En el presente Informe Anual del ejercicio de 1990 se incorpora en los epígrafes correspondientes el resultado de la fiscalización de dichas actuaciones, resultado que a continuación se sintetiza, siguiendo el orden establecido en la citada Resolución.

ACUERDO I

- En relación con las materias referidas en el apartado I.a sobre inventarios completos de "Inmuebles", "Terrenos y solares", "Inmuebles en construcción" y "Vehículos", la Seguridad Social ha elaborado dichos inventarios, en unos casos por vez primera y en otros revisando los existentes, a la vez que se han planteado ajustes para adecuar los saldos contables a la realidad patrimonial. Ello ha dado lugar en conjunto a una información más completa que en ejercicios anteriores, tanto en lo que afecta a inversiones como amortizaciones. En consecuencia, puede afirmarse que en las cuentas referidas se han alcanzado fundamentalmente los objetivos establecidos.

- Respecto a lo requerido en el apartado I.b, acerca de la consecución de resultados en el proceso de formación de inventarios de "Instalaciones", "Mobiliario y material no móvil" y "Existencias", se ha aportado un gran volumen de documentación relativa a la mayor parte de los Centros. Esta documentación pone de manifiesto la recopilación de antecedentes y realización de análisis que suponen un avance significativo y la ejecución de una fase necesaria para la obtención de inventarios físicos correctos que ha de ser completada y homogeneizada.

- Acerca del apartado I.c, en el que se fija como objetivo conseguir la relación inventariada de los préstamos concedidos, hay que señalar, por lo que se refiere al Instituto Social de la Marina, que los resultados obtenidos han permitido subsanar las deficiencias derivadas de la regularización practicada en el ejercicio de 1987 por dicha Entidad, reiteradamente expuestas por el Tribunal de Cuentas en Informes Anuales precedentes. El estudio llevado a cabo sobre la situación de los préstamos sociales concedidos por el Instituto Social de la Marina ha esclarecido la situación real de los mismos, formulando a su vez un proyecto de regularización contable de las rúbricas afectadas que se estima adecuada a los fines establecidos por la Resolución de la Comisión Mixta.

  También y por lo que respecta a los saldos que figuran en el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social, se ha establecido una sistemática de tareas de clarificación y regularización contable con aportación de datos complementarios que conducen asimismo a la cuantificación de la deuda viva y que permiten alcanzar de inmediato resultados concretos en relación con el objetivo previsto por la Comisión Mixta.

[1] El texto de la Resolución se transcribe al final de este apartado

- El apartado I.d de la Resolución de la Comisión Mixta, que determina la consecución de resultados en el proceso de formación de inventarios de "Préstamos y anticipos al personal" y "Fianzas y depósitos", se ha cumplimentado mediante informe en el que se establecen las líneas de actuación a seguir en la elaboración de inventarios, fijando nuevos saldos de las cuentas con aportación de relaciones inventariadas. Los resultados obtenidos no son definitivos, estando pendiente la conciliación de saldos contables e inventarios y la confirmación de la vigencia de las partidas que integran éstos.

- Por lo que se refiere al apartado I.e de la repetida Resolución de la Comisión Mixta, que ordena la elaboración de relaciones de deudores y acreedores ajustadas a la realidad de los derechos y obligaciones de la Seguridad Social, se han realizado tareas de clarificación que afectan al 76% del saldo a 31.12.1990 de "Deudores" de la Tesorería General de la Seguridad Social, planteándose propuestas de ajuste de los saldos contables a la realidad económica. El resto de las Entidades han completado los inventarios existentes, estando en curso de realización las operaciones de actualización y verificación del carácter de realizables de los derechos.

  En materia de "Acreedores", las deficiencias que fundamentaron dicha Resolución se localizaban en determinadas subcuentas relativas a "Acreedores extrapresupuestarios", en relación con las cuales se han aportado informes y documentación justificativa que ponen de manifiesto sensibles avances en la representación contable de estos pasivos, sin perjuicio de su provisionalidad, máxime si se tienen en cuenta las tareas de actualización en curso de ejecución.

- En relación con las cuentas de "Partidas pendientes de aplicación" y "Operaciones en curso" que se contemplan en el apartado I.f de la Resolución, se han elaborado informes que contienen una planificación de los trabajos a desarrollar y de las actuaciones concretas de ajustes de saldos que están en fase de ejecución.

- En el apartado I.g de la Resolución se requiere informe sobre las formalizaciones contables relativas a los traspasos de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas. Las operaciones de traspaso del inmovilizado material, que son las más relevantes, están cuantificadas y segregadas en los inventarios, habiéndose procedido a su contabilización en el ejercicio de 1991. El resto de las formalizaciones, consecuencia del proceso de descentralización autonómica, están ya realizadas al cierre del ejercicio de 1990, si bien son susceptibles de algunas rectificaciones y aplicaciones definitivas.

ACUERDO II

- En cumplimiento del Acuerdo II de la Resolución de la Comisión Mixta, relativo a los expedientes de depuración tramitados por la Comisión para el estudio de las cuentas y balances de la Seguridad Social, se han llevado a cabo una serie de actuaciones complementarias que han permitido subsanar los defectos señalados en anteriores Informes, sin perjuicio de los trámites presupuestarios y contables pendientes de ejecución.

ACUERDO III

Como consecuencia de las actuaciones expuestas, este Tribunal considera que:

- Se ha venido desarrollando un proceso de progresiva mejora en la presentación de las cuentas de la Seguridad Social a partir del ejercicio de 1985, que se ha puesto de manifiesto en los Informes Anuales precedentes.

- Respecto al ejercicio de 1990, las actuaciones extraordinarias desarrolladas por la Seguridad Social a requerimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, relativas a los balances de situación de las distintas Entidades, han supuesto una mejora significativa en el contenido de la información contable rendida y un proceso de ajuste de saldos a la realidad económica y patrimonial de las Entidades del Sistema de la Seguridad Social.

- La totalidad de las Entidades han presentado en tiempo y forma los estados contables anuales relativos al ejercicio de 1990, existiendo coherencia interna entre los mismos y la documentación que les sirve de soporte.

Por cuanto antecede y como consecuencia, se propone la calificación favorable de las cuentas de la Seguridad Social del ejercicio de 1990. Asimismo y en cumplimiento del Acuerdo III de la Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de 12 de Mayo de 1992, se propone la misma calificación para los ejercicios precedentes pendientes de aprobación, habida cuenta el carácter acumulativo de los balances de situación, en cuyas deficiencias contables se fundamentó dicha falta de aprobación.

La calificación que antecede ha de entenderse sin perjuicio de las salvedades que se exponen en los apartados que siguen, en los que se señalan las deficiencias más significativas que persisten en los estados contables de la Seguridad Social:

- En el "Inmovilizado", no obstante la información complementaria que se ha recibido en el Tribunal de Cuentas en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Mixta, el proceso de formación de inventarios debe continuarse para alcanzar resultados definitivos, ya que los trabajos desarrollados constituyen tareas que deben proseguir para la obtención de los inventarios físicos correspondientes. Asimismo, en otros casos está pendiente la materialización contable de los ajustes y regularizaciones proyectados para conciliar las cifras de los inventarios con los saldos contables, así como la distribución o imputación adecuada de los respectivos fondos de amortización.

  Hay que señalar que, a pesar de los progresos alcanzados, la información rendida sigue poniendo de manifiesto que el contenido de determinadas rúbricas, "Instalaciones" y "Mobiliario y material no móvil" principalmente, adolece de defectos significativos en materia de representatividad, ya que numerosas partidas o elementos pertenecientes por su naturaleza a la segunda cuenta figuran contabilizados en la primera, en la que, asimismo, se han activado gastos corrientes. Estos problemas de representatividad afectan en algunos supuestos (INSERSO y Tesorería General de la Seguridad Social) a las cuentas relativas a "Inmovilizaciones en curso", en las que, a pesar de su transitoriedad, permanecen saldos inalterables de ejercicios anteriores, además de incluir indebidamente en algún Organismo (Tesorería General de la Seguridad Social) inversiones que corresponden a inmuebles terminados.

- En "Aprovisionamientos", algunas Entidades (INSS, ISM y Tesorería General de la Seguridad Social) no han llevado a cabo el adecuado reflejo contable de las existencias. La formalización de los aprovisionamientos se contempla en la normativa reguladora de la materia, al margen del carácter asistencial o administrativo de los mismos. El Plan de cuentas vigente en el ejercicio de 1990 (R.D. 3261/1976, de 31 de diciembre), así como el Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social de 11 de febrero de 1985 (cuya aplicación se preve a partir de 1.1.1993) contienen rúbricas contables destinadas a tal fin.

  Por lo que se refiere a las Entidades que presentan saldo al cierre del ejercicio (INSALUD e INSERSO), hay que señalar la necesidad de impulsar las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha para culminar la formación de inventarios y sanear el contenido de la cuenta. En el INSALUD los inventarios aportados, que representan el 50% del valor de las existencias, evidencian la falta de conciliación con el saldo contable de varios Centros de gestión, en algunos de los cuales determinadas rúbricas presentan valores negativos al cierre del ejercicio ("Víveres" y "Material sanitario. Implantes"). En cuanto al INSERSO, si bien se ha aportado inventario de los distintos Centros del mismo, hay que significar que la información rendida adolece de falta de homogeneidad en la presentación de datos, y en la aplicación de criterios de valoración.

- En el grupo de cuentas de "Deudores y Acreedores", no obstante las actuaciones específicas llevadas a cabo, subsisten varias anomalías, por lo que es preciso proseguir hasta su culminación la labor de saneamiento emprendida. Hay que señalar al respecto que, de la documentación justificativa de los saldos contables, se desprende la existencia de cuentas divisionarias cuya naturaleza no se adecúa a la cuenta en la que se integran. Otras cuentas tienen carácter transitorio y por tanto debieran figurar saldadas al cierre del ejercicio, y por último, en varias cuentas figuran numerosas partidas sin justificar con signo contrario a su naturaleza y conceptos indeterminados o impropios del significado de las mismas, aspectos que han de ser subsanados.

  De otra parte y por lo que respecta a "Deudores", hay que resaltar la omisión de operaciones que representan derechos realizables cuyo registro contable se ha llevado a cabo parcialmente en cuentas de orden, con la consiguiente incidencia negativa en la representatividad de los balances de situación de las Entidades afectadas (INSS y Tesorería General de la Seguridad Social). En cuanto al subgrupo de "Acreedores", hay que destacar también, con significado opuesto al anterior, la inclusión de operaciones que no representan obligaciones para la Seguridad Social, como es el caso de las recogidas en la subcuenta "Recaudación líquida pendiente de tratamiento" de la Tesorería General por un montante de 7.422 millones de pesetas al cierre del ejercicio.

- En el grupo de "Cuentas diversas", las de carácter transitorio figuran al cierre del ejercicio con saldos elevados pendientes de aplicación finalista.

  En "Partidas pendientes de aplicación" el balance de situación agregado de Entidades refleja un saldo global de 55.172 millones de pesetas en el activo y de 115.878 millones en el pasivo. Estas cifras, que se derivan de conceptos de naturaleza muy diversa y que en algunos casos tienen varios años de antigüedad, comprenden también importes muy elevados de gastos realizados sin cobertura presupuestaria, lo que supone la existencia de activos ficticios en el balance y la consiguiente distorsión de los resultados del ejercicio correspondiente.

  En "Operaciones en curso" figuran en el balance de situación agregado de Entidades unos saldos de 2.507 millones de pesetas en el activo y de 12.858 millones en el pasivo. También comprende esta rúbrica conceptos de naturaleza muy diversa, así como partidas y a veces cuentas divisionarias completas con varios años de antigüedad, no correspondiendo en muchos casos las operaciones formalizadas en la misma con las que determina la norma contable de aplicación, según la cual deben registrarse en ella las transferencias de efectivo en curso de realización.

- Las "Cuentas de Orden" incluyen también operaciones que trascienden del carácter meramente informativo que tienen las

mismas, lo que desvirtúa la representatividad de los balances. Se trata de auténticos derechos que deben tener el consiguiente y adecuado reflejo en cuentas de activo de carácter patrimonial. Es el caso de los conceptos que se citan a continuación:

. Débitos por prestaciones pagadas indebidamente por la Seguridad Social, cuyos saldos a 31.12.1990 asciende a 9.315 millones de pesetas en el INSS y a 646 millones en la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que representen por otra parte la totalidad de estas operaciones.

. Débitos por cotizaciones a la Seguridad Social pendientes de cobro "Por certificaciones de descubierto a cobrar por Unidades de Recaudación Ejecutiva (URES)" con un saldo a 31.12.1990 de 458.514 millones de pesetas y "Por aplazamiento y fraccionamiento" con un saldo a dicha fecha de 254.417 millones; saldos cuya adecuación a la realidad de la cotización pendiente de cobro por la Seguridad Social no está debidamente acreditada.

. Deudas de "Entidades sustitutorias" en concepto de coste de la integración de sus Regímenes de previsión social en el Régimen General de la Seguridad Social, con un saldo a 31.12.1990 de 58.410 millones de pesetas.

- El superávit por operaciones presupuestarias que luce en las cuentas de la Seguridad Social desde el ejercicio de 1985 está cuestionado por la formalización en rúbricas de activo de carácter transitorio de gastos realizados sin cobertura presupuestaria. En concreto, en el ejercicio de 1.990 se han registrado en el INSALUD operaciones de tal naturaleza en la cuenta "Partidas pendientes de aplicación" por valor de 19.299 millones de pesetas y en la Tesorería General de la Seguridad Social por, al menos, 3.061 millones, lo que da lugar a su vez a la existencia de activos ficticios con la consiguiente distorsión en la representatividad de los respectivos balances de situación.

  Además, dichos resultados están afectados por la existencia de obligaciones sin cobertura presupuestaria derivadas del coste de asistencia sanitaria del propio ejercicio de 1990 y anteriores, que no han tenido reflejo contable alguno y que han dado lugar a la concesión de un crédito extraordinario de 280.558 millones de pesetas (Real Decreto-Ley 6/1992, de 13 de noviembre).

- La cuenta de liquidación del presupuesto está afectada a su vez por la falta de contabilización de los gastos realizados sin cobertura presupuestaria a la que se ha hecho referencia en el apartado precedente.

- Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales presentan carencias en la documentación complementaria que deben rendir a este Tribunal en cumplimiento de lo dispuesto por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13.11.1990, reguladora de las operaciones de cierre del ejercicio de 1990, carencias que constituyen una limitación para el análisis de estas Entidades.

  Las deficiencias fundamentales afectan principalmente a los inventarios (el 21% de las Mutuas no han remitido los mismos y un 41% lo han hecho de forma parcial) y a la especificación de las dotaciones, aplicaciones y regularizaciones de reservas y fondos especiales.

- En materia de depuración de cuentas, es preciso culminar las actuaciones realizadas por la Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social. A este respecto, deberá resolverse la cobertura presupuestaria para la regularización definitiva de los expedientes relativos a gastos realizados al margen de la disciplina presupuestaria y cuyo montante asciende a 56.881 millones de pesetas. Asimismo, deberá materializarse contablemente la incorporación al patrimonio de la Seguridad Social de las operaciones de determinados expedientes, que se han definido o reclasificado como operaciones de capital y cuyo valor asciende a 105 millones de signo deudor y 45 millones de signo acreedor.

RESOLUCION *de 12 de mayo de 1992 aprobada por la comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el informe suplementario sobre las actuaciones de la Comisión para el estudio de las cuentas y Balances de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el día 29 de mayo de 1991 y dictamen emitido por la mencionada Comisión, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el día 21 de noviembre de 1991.*

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 12 de mayo de 1992, a la vista del informe suplementario sobre las actuaciones de la Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el día 29 de mayo de 1991 (expediente número 251/000017) y dictamen sobre el informe emitido por la Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno del Tribunal el día 21 de noviembre de 1991 (expediente número 251/000025).

A C U E R D A

I. Requerir al Gobierno para que remita al Tribunal de Cuentas la siguiente documentación, en relación con las materias que se citan, relativas a las Cuentas de la Seguridad Social.

a) Inventarios completos de inmuebles, terrenos y solares, inmuebles en construcción, con relación de los bienes integrantes debidamente valorados y con referencia a la fecha de adquisición, así como inventario de vehículos y los fondos de amortización debidamente imputados.

b) Informe sobre los resultados obtenidos en la formación de inventarios de instalaciones, mobiliario y materia no móvil y existencias, con clasificación por centros, valorados con referencia a la fecha de adquisición y con imputación de los correspondientes fondos de amortización.

c) Relación inventariada de préstamos concedidos no cancelados, con expresión individualizada de prestatarios, fecha de origen y cuadros de amortización correspondientes.

d) Informe sobre los resultados obtenidos en la formación de inventarios de préstamos y anticipos al personal, así como de fianzas y depósitos.

e) Relación de las partidas que componen los saldos representativos de las cuentas de deudores y acreedores e informe sobre la tramitación de los expedientes precisos para su adecuación a la realidad de los derechos y obligaciones realizables y exigibles para la Seguridad Social.

f) Informe sobre la composición de los saldos representativos de las cuentas partidas pendientes de aplicación y operaciones en curso, determinando la naturaleza de los apuntes que las integran para proceder a su aplicación finalista o regularización.

g) Informe sobre las formalizaciones contables relativas a los traspasos de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas con las rectificaciones precisas en las anotaciones contables hasta la fecha.

II. Requerir asimismo al Gobierno para que proceda a efectuar la regularización definitiva de los expedientes señalados en el precitado dictamen del Tribunal de Cuentas de 21 de noviembre de 1991, mediante la correspondiente aplicación a presupuesto.

III. Instar al Tribunal de Cuentas a que, una vez recibida y analizada la documentación señalada en los apartados anteriores, incorpore en el Informe Anual que proceda, propuesta de calificación de las Cuentas de la Seguridad Social de los ejercicios pendientes de aprobación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1992.- El Presidente de la Comisión, Luis Berenguer Fuster.

II. EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

II.1.- ASPECTOS GENERALES

En el examen y comprobación de las cuentas de la Administración de la Seguridad Social del ejercicio 1990 se han tenido en cuenta los procesos seguidos en los análisis de carácter regular y periódico concernientes a los Informes anuales de ejercicios precedentes, así como las fiscalizaciones que por mandato de las Cortes se han llevado a cabo en relación con las actuaciones de la Comisión para el estudio de las cuentas y balances de la Seguridad Social, que figuran en el Informe Suplementario de este Tribunal de fecha 29 de mayo de 1991 y en el Dictamen de fecha 21 de noviembre de 1991 (B.O.E. nº. 129 de 29.5.1992).

Las actuaciones practicadas se han dirigido a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, la concordancia entre los distintos estados contables y su coherencia con la documentación que les sirve de soporte. Y ello con objeto de poder determinar si la realidad económica, financiera y patrimonial de la Seguridad Social está adecuadamente representada en sus cuentas.

La presentación de los resultados de dicho examen y comprobación se estructura por estados contables y Entidades, dedicando especial atención al balance de situación de cada una de ellas, por constituir el documento esencial en el que se sintetiza la situación económica y financiera de los Organismos de esta Administración Pública y porque en él se ha fundamentado en Informes precedentes la calificación de las cuentas de la Seguridad Social. También son objeto de singular tratamiento la cuenta de liquidación del presupuesto y los resultados del ejercicio, por constituir partes integrantes de los estados contables a rendir y por la especial relevancia de las áreas a que se refieren.

En este apartado se incluyen, asimismo, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, desde la perspectiva de homogeneizar el análisis y verificación de los correspondientes estados contables siguiendo los mismos criterios que para el resto de las Entidades, sin perjuicio de las peculiaridades que le son propias por su especial naturaleza jurídica.

Por último, hay que significar que el presente examen y comprobación de cuentas se ha realizado considerando de forma particular la documentación remitida por el Gobierno en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, de 12.5.1992 (en lo sucesivo

Resolución de la Comisión Mixta), por la que se insta al mismo a incorporar en el Informe Anual que proceda la propuesta de calificación de las cuentas de los ejercicios pendientes de aprobación. Los resultados del análisis de esta documentación se incluyen en los correspondientes epígrafes del presente Informe impresos con letra de caracteres diferenciados.

II.1.1.- NORMATIVA

La normativa fundamental reguladora del presupuesto de la Seguridad Social, de la formalización contable de operaciones y de la rendición y fiscalización de cuentas se reseña a continuación, con objeto de delimitar el marco jurídico en el que se desarrolla la gestión de la misma:

a) Área de presupuestos

El presupuesto de la Seguridad Social, como parte integrante de los Presupuestos Generales del Estado (conforme determina el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria), está sometido a la normativa general y básica reguladora de los mismos, si bien en esta materia conviene resaltar la preponderancia de su legislación específica, expresamente contemplada en dicho Texto Refundido (Art. 5):

* Ley General Presupuestaria (Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre).
* Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
* Orden de 20 de enero de 1989, del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre gestión, modificación y seguimiento de los créditos del Instituto Nacional de la Salud.
* Orden de 21 de enero de 1989, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre contabilidad y seguimiento presupuestarios de la Seguridad Social.
* Orden de 9 de marzo de 1989, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dictan normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para 1990.
* Orden de 31 de julio de 1989, del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre gestión, modificación y seguimiento de los créditos del presupuesto del Instituto Nacional de la Salud.

b) Área de contabilidad

En este área hay que señalar, de una parte, la aplicabilidad de varios preceptos que figuran dispersos en distintas normas de carácter general y básico, y de otra, al igual que en materia de presupuestos, la existencia de una legislación específica aplicable al desarrollo de la contabilidad presupuestaria y financiera de la Seguridad Social:

* Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social.
* Orden de 11 de febrero de 1985, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social.
* Orden de 21 de enero de 1989, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre contabilidad y seguimiento presupuestarios de la Seguridad Social.
* Orden de 30 de julio de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan la composición y funciones de la Comisión para el estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social.
* Orden de 13 de diciembre de 1990, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 1990 y se determina la documentación contable que han de rendir los agentes del Sistema de la Seguridad Social.

c) Rendición y fiscalización de cuentas

La normativa reguladora de la rendición y fiscalización de cuentas afecta a la Seguridad Social desde una perspectiva general, por referirse en tales términos al sector público estatal del que aquella forma parte, y desde otra particular, en el caso de la dictada expresamente para su aplicación a la misma:

* Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo).
* Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social.
* Ley General Presupuestaria (Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre).
* Orden de 13 de diciembre de 1990, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 1990 y se determina la documentación contable que han de rendir los agentes del Sistema de la Seguridad Social.

Por lo que se refiere a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, hay que tener en cuenta, además de las normas que se acaban de citar, las de carácter particular que a continuación se relacionan:

* Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de colaboración de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo en la gestión de la Seguridad Social.
* Orden de 8 de mayo de 1977, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reguladora del procedimiento de cálculo de la cuantía máxima de los gastos de administración y de la fianza exigible a las Mutuas (modificada por Orden de 20.10.1985).
* Orden de 2 de abril de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre colaboración de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo en la gestión de la Seguridad Social.
* Orden de 15 de marzo de 1990, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre gastos de administración de las Mutuas en los supuestos de fusiones y absorciones.

II.1.2.- ESTRUCTURA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La estructura y presentación de las cuentas de la Seguridad Social se adecúa en términos generales a lo establecido en la Orden de 13.12.1990, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que regula las operaciones de cierre del ejercicio y determina la documentación contable que ha de rendirse por los agentes del Sistema de la Seguridad Social.

Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, hay que señalar que, en general, se han presentado en plazo los estados contables anuales relativos al ejercicio 1990, sin embargo la documentación preceptiva complementaria y justificativa de los mismos, a pesar de los progresos experimentados en los últimos ejercicios, mantiene algunas carencias de la misma índole que las que motivaron la falta de aprobación de las cuentas de la Seguridad Social en ejercicios precedentes y que propiciaron, asimismo, la citada Resolución de la Comisión Mixta, por la que se requirieron actuaciones extraordinarias del Gobierno para subsanar tales carencias.

II.2.- BALANCE DE SITUACIÓN

En este epígrafe se incluyen los resultados del análisis de los balances agregados y consolidados que elabora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de los que a su vez rinden cada una de las Entidades.

Con carácter previo al análisis de los citados balances es necesario resaltar la falta de un marco contable adecuado a la realidad económica e institucional de la Seguridad Social, lo que viene produciendo múltiples disfunciones en el reflejo contable de los hechos económicos, ya que hasta el ejercicio que nos ocupa se ha seguido aplicando básicamente el Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre, que resulta totalmente obsoleto, habida cuenta las modificaciones estructurales y de todo orden que ha experimentado la Seguridad Social desde la publicación de dicha norma.

La Orden de 11.2.1985, de dicho Ministerio, por la que se establece el Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social adaptado a las directrices del Régimen General de Contabilidad Pública, vino a actualizar el marco contable referido, estableciendo su aplicación de manera gradual.

Por Resolución de 29 de diciembre de 1992, es decir fuera del periodo a que este Informe se refiere, la Secretaría General para la Seguridad Social aprobó la adaptación del Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la misma y su aplicación a partir del día 1 de enero de 1993.

II.2.1.- BALANCES INTEGRADOS

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elabora diversos estados contables agregados y consolidados, de acuerdo con lo establecido en el art. 5.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que dice: "Las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo remitirán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las cuentas y balances del ejercicio anterior a los efectos de su integración y posterior remisión al Tribunal de Cuentas".

Por lo que se refiere al balance de situación, el citado Departamento ha elaborado los siguientes estados-resumen con la información recibida de las distintas Entidades:

- Balance agregado de Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social.
- Balance agregado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
- Balance agregado del Sistema.
- Balance consolidado del Sistema.

De la verificación de las cifras que figuran en los mencionados balances se deducen las siguientes observaciones:

- En el balance agregado de Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social, el Ministerio presenta el saldo de "Fianzas recibidas" (que corresponde a la Tesorería General y que tiene signo contrario a la naturaleza de la

cuenta) compensado con el saldo de "Depósitos recibidos". La diferencia en ambas rúbricas asciende a 722 millones de pesetas.

- En el balance agregado de Mutuas se produce una duplicidad como consecuencia de la inclusión en el mismo de Mutuas absorbidas cuyos saldos ya figuran incorporados en las absorbentes. El importe de los saldos duplicados asciende a 380 millones de pesetas.

- Lógicamente, los balances agregado y consolidado del Sistema incorporan en sus saldos las diferencias mencionadas en los apartados anteriores.

Con independencia de las observaciones que anteceden, es necesario resaltar como aspecto fundamental la falta de representatividad de los saldos que figuran en estos balances, habida cuenta la disparidad de criterios seguidos en la contabilización de operaciones por las distintas Entidades, como consecuencia, a su vez, de la falta de un plan de contabilidad debidamente desarrollado que contemple de forma coherente e integral los diversos e interrelacionados hechos económicos que se producen en la Seguridad Social, en lugar de la proliferación de instrucciones de carácter parcial que existen en la actualidad emitidas por las distintas Entidades y que han sido factores coadyuvantes de las disfunciones que se han venido padeciendo en materia de contabilidad.

II.2.2.- BALANCE POR ENTIDADES

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora de la rendición de cuentas y particularmente en la Orden de 13.12.1990, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 1990 y se determina la documentación contable que ha de rendirse por los agentes del Sistema de la Seguridad Social, las Entidades Gestoras y la Tesorería General de la misma, han elaborado los respectivos balances de situación al 31.12.1990, documentos que, como ya se ha señalado, se han presentado en este Tribunal en plazo reglamentario.

Estos estados contables han sido objeto en ejercicios anteriores de un análisis pormenorizado, cuyo resultado ha determinado la falta de aprobación de las cuentas de la Seguridad Social, básicamente por la falta o inadecuada representatividad de importantes áreas económicas de la misma, particularmente en el ámbito de la Tesorería General. Estas anomalías de ejercicios pasados no fueron debidamente subsanadas en el transcurso del ejercicio 1990, por lo que siguen luciendo en los balances de situación al 31 de diciembre, habida cuenta el carácter acumulativo de estos documentos. Sin embargo hay que significar que no se ha detectado un empeoramiento de la situación como consecuencia del registro de las operaciones relativas al ejercicio que nos ocupa. Por el contrario, en casos puntuales se han producido mejoras en la información rendida, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo.

Por otra parte, hay que señalar que la Resolución de la Comisión Mixta ha promovido la iniciación de importantes actuaciones en orden a la subsanación de las deficiencias que han determinado la referida falta de aprobación, actuaciones que ya han dado lugar a la consecución de algunos de los objetivos establecidos, así como a la ejecución, con diverso grado de desarrollo, de tareas previas necesarias para el logro de los restantes.

A continuación se exponen los resultados derivados del análisis de los balances de situación de las distintas Entidades, así como de la documentación complementaria aportada como consecuencia de la Resolución de la Comisión Mixta.

II.2.2.1.- Instituto Nacional de la Seguridad Social

Activo

Inmovilizado material

En este subgrupo de cuentas el Instituto Nacional de la Seguridad Social presenta saldos en las de "Instalaciones" por un valor bruto de 788 millones de pesetas y un fondo de amortización de 508 millones, "Mobiliario y material no móvil" con 10.211 y 2.609 millones, respectivamente, y "Material móvil" con 38 y 14 millones también respectivamente.

En la cuenta de "Instalaciones" una gran parte de los conceptos que integran su saldo son propios de la cuenta de "Mobiliario y material no móvil" y otros muchos representan gastos corrientes. En la documentación aportada, que no evidencia la realización de un recuento físico de los bienes en uso de esta naturaleza, no se hace referencia a los centros de ubicación de los mismos, ni se segregan los relativos a las Agencias de la Entidad.

En 1989 se practicó en esta cuenta una regularización por la que se dieron de baja en contabilidad 441 millones de pesetas, en un intento de obtener inventarios de esta masa patrimonial, si bien con las limitaciones y defectos ya citados que permanecen en los inventarios justificativos del saldo del ejercicio 1990.

Por cuanto antecede, puede afirmarse que el proceso de formación de inventarios de instalaciones no ha conducido hasta la fecha a resultados definitivos, , por lo que se estima necesario el desarrollo de la normativa que clarifique suficientemente la naturaleza de las inversiones que deben imputarse a tal rúbrica, así como la culminación del ajuste de los datos contables a la realidad patrimonial.

En "Mobiliario y material no móvil" se han acometido tareas similares en el ejercicio 1990, en las que se ha determinado un saldo residual como susceptible de regularización de 1.118 millones de pesetas. En este concepto del inmovilizado la Entidad Gestora ha elaborado instrucciones específicas para la consecución de inventarios reales con los bienes correctamente identificados y debidamente valorados. Sin embargo, los inventarios recibidos como justificativos de los saldos contables adolecen de falta de referencia al centro de ubicación de los mismos y, como se ha indicado en la cuenta que precede, no se han seguido criterios homogéneos de imputación de conceptos de la misma naturaleza. De la documentación aportada se deduce que no se ha procedido al recuento físico de los bienes en uso por la Entidad, lo que, unido a la falta de la necesaria diferenciación de los que deben integrarse en la cuenta de "Instalaciones", aconseja también llevar a cabo con carácter previo a cualquier baja en contabilidad la culminación del proceso de ajuste de los datos contables a la realidad patrimonial.

En "Material móvil" se produce una baja en contabilidad de vehículos desaparecidos por importe de 8,5 millones de pesetas mediante aplicación al efecto del fondo de amortización, sin que se haya incoado expediente en el que consten identificados los citados vehículos y las circunstancias que han dado lugar a su desaparición. Por otra parte y teniendo en cuenta los criterios de imputación de amortizaciones seguidos en los últimos ejercicios, no hay constancia de que las aplicadas a la citada baja correspondiesen a los vehículos mencionados.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que anteceden. Es precisamente en la resolución aludida en alegaciones donde se manifiesta desconocer los vehículos desaparecidos, señalando que se trata de un saldo contable sin detalle en inventario. Por consiguiente, las amortizaciones no pueden haberse aplicado debidamente. Por otra parte, no existe constancia de expediente que fundamente la citada resolución.

Con anterioridad a la Resolución de la Comisión Mixta, esta Entidad viene acometiendo tareas necesarias para la consecución de inventarios reales del inmovilizado material, aunque no se haya culminado tal objetivo.

Inmovilizaciones en curso

Sólo presenta saldo la cuenta "Inmuebles en construcción", por un importe de 5.900 millones de pesetas. El incremento respecto del ejercicio anterior, que supone un 97%, se debe básicamente a las adquisiciones de locales para Centros de Atención e Información de la Seguridad Social por valor de 1.979 millones y a la ejecución de obras de adaptación de dichos locales por valor de 1.201 millones.

Del análisis de la naturaleza de los bienes imputados a esta cuenta se deduce que la casi totalidad de las partidas que la integran no se corresponden con el concepto de inmuebles en construcción, ya que se trata de locales adquiridos ya construidos y de gastos de acondicionamiento para el fin propio de la Entidad.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que anteceden. La aplicación presupuestaria no justifica la imputación contable inadecuada a la naturaleza del gasto, cuando además esta Entidad Gestora formaliza en la cuenta de Instalaciones el mismo tipo de gastos.

Aprovisionamientos y suministros

Esta Entidad no formaliza operaciones en este subgrupo de cuentas, a pesar de que en su gestión se producen adquisiciones y consumos de bienes almacenables, lo que da lugar a la falta del adecuado reflejo contable de esta área económica.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que anteceden. El Plan de Cuentas que se aplica en el ejercicio 1990 (R.D. 3261/1976, de 31 de diciembre) contempla la formalización de todas las Existencias sin exclusión de las de carácter administrativo. También la nueva normativa contable (SICOSS), de aplicación a partir de 1.1.1993, establece igual criterio.

No es el principio de importancia relativa que se cita en alegaciones el determinante de la formalización como existencias de los bienes almacenables, sino el hecho de que estos bienes, al margen de su valor, procedan de gastos administrativos o asistenciales.

Respecto al criterio de economicidad, también aludido en alegaciones, no resultaría lesionado por las formalizaciones contables de existencias puesto que se manifiesta tener establecidos controles extracontables de almacenes.

Deudores diversos

Esta cuenta presenta a 31.12.1990 un saldo de 371 millones de pesetas, documentado con el correspondiente inventario, en el que se integran varias subcuentas.

Entre dichas subcuentas destaca la de "Descuentos en prestaciones pendientes de aplicación" con un saldo de 120 millones, de carácter transitorio y sustitutivo de los correspondientes cargos en las cuentas de naturaleza acreedora representativos de los descuentos en prestaciones. La utilización de este tipo de cuentas dificulta el seguimiento de las operaciones y la adecuada valoración de las que efectivamente deben reflejar las mismas. En todo caso y dado su carácter transitorio debieran quedar saldadas al cierre del ejercicio como aconseja la instrucción reguladora de la Intervención General de la Seguridad Social (Circular 2/88).

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que anteceden. El criterio del Tribunal no se ha interpretado correctamente, ya que no se cuestiona la existencia de partidas contrarias a la naturaleza de la cuenta, sino su falta de justificación.

Por otra parte, hay que señalar que el registro transitorio de estas operaciones solamente se ha seguido por el INSS, en aplicación de su Circular Núm. 4/1991, de 8 de marzo, sobre "Normas contables para el cierre del ejercicio 1990 y apertura de 1991, en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social" (apartado 2.5.1), en la que se recoge una recomendación por nota interior de la Intervención General de la Seguridad Social que entra en contradicción con la instrucción 3.1 de la Circular nº 2/88 de dicho centro directivo, instrucción que no ha sido derogada por otra posterior de igual rango y que en todo caso debería haberse impartido con carácter general. Esta forma de proceder contribuye, como ya se ha denunciado en otro apartado del Informe, a la proliferación de normas de carácter parcial determinantes de disfunciones en materia de contabilidad.

La subcuenta "Operaciones en trámite de formalización", con un saldo de 86 millones de pesetas, presenta en algunas Direcciones Provinciales diversas partidas de ejercicios con dos, tres o más años de antigüedad y conceptos no representativos de derechos a favor de la Entidad.

La subcuenta "Operaciones convenios internacionales", figura con un saldo de 55 millones de pesetas, que no es representativo de la situación real en materia de derechos y obligaciones de la Seguridad Social por razón de este tipo de operaciones, ya que es el resultado neto de la posición deudora (260 millones) y acreedora (205 millones) de los distintos convenios suscritos, cuando este tipo de saldos no son compensables, debiendo figurar en el activo los deudores y en el pasivo los acreedores.

La subcuenta "Entregas a justificar fondo de maniobra" presenta en la Dirección Provincial de Logroño un saldo de 1,8 millones de pesetas integrado en su totalidad por el concepto "cargos sin justificar", que según la Entidad corresponde a derechos inexistentes procedentes del ejercicio 1981.

Deudores por prestaciones

Esta Entidad no presenta saldo en esta cuenta, no obstante la importancia relativa de este tipo de operaciones en su gestión económica. La contabilización de los créditos por prestaciones pagadas indebidamente se sigue efectuando en cuentas de orden de carácter meramente informativo, lo que desvirtúa la verdadera situación patrimonial, además de la no observación del principio del devengo que debe aplicarse a dichas operaciones.

El saldo que figura en cuentas de orden por el concepto que nos ocupa asciende a 9.315 millones de pesetas, localizándose el 40,8% en la Dirección Provincial de Barcelona. Sobresalen como incidencias mas frecuentes la antigüedad de numerosas partidas, la existencia de muchas de signo contrario a la naturaleza de la cuenta, la indeterminación de algunos conceptos de los inventarios y la permanencia de deudores por cantidades relativamente importantes que no reintegran, existiendo incluso algunos cuya deuda se incrementa de un ejercicio a otro.

Deudores por prestaciones anticipadas

Esta cuenta, que figura con un saldo de 23,7 millones de pesetas, de los que un 54 % corresponden a partidas anteriores a 31.12.1989, presenta algún importe elevado durante largos períodos de tiempo, de lo que podría deducirse que no ha recaído resolución definitiva sobre las prestaciones que se anticipan.

Tesorería

En las cuentas de tesorería figuran Caja y Bancos con un saldo de 7,4 y 1.137,5 millones de pesetas, respectivamente, destacando por lo que a esta última se refiere el importe del saldo de la cuenta bancaria correspondiente a la Dirección Provincial de Barcelona, que representa el 48,5% del total de la Entidad y el 42% del Fondo de maniobra autorizado a la misma (que en el último ejercicio se ha incrementado en un 50%).

También por lo que respecta al Fondo de maniobra, hay que señalar que se observa conciliación entre las distintas cuentas que intervienen en su funcionamiento pero no existe coincidencia entre el importe que la Tesorería General comunica como Fondo autorizado y el que figura como tal en la contabilidad de la Entidad, cuatro Direcciones Provinciales (Córdoba, Lugo, Las Palmas, y Pontevedra) y los Servicios Centrales.

Por otra parte, se observa que en esta Entidad figura en la cuenta "Operaciones en curso" un importe del Fondo justificado y pendiente de abono en cuenta corriente de 2.473 millones de pesetas, sin que exista constancia de que tales operaciones se refieran efectivamente a transferencias de efectivo en curso de realización entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el INSS.

No se aceptan las alegaciones a las observaciones que anteceden. La justificación de gastos del Fondo de Maniobra no da lugar automáticamente a remesas de efectivo en curso de realización. Estas se producen cuando la Tesorería General de la Seguridad Social ha cursado la correspondiente orden de pago material.

Por último y con carácter general para todas las Entidades del Sistema, hay que señalar que no se están siguiendo criterios uniformes en el tratamiento contable del Fondo de maniobra, ya que se utilizan indistintamente las cuentas "Deudores diversos", "Partidas pendientes de aplicación" y "Operaciones en curso" para reflejar operaciones de la misma naturaleza. El SICOSS a partir del ejercicio 1993 prevé unificar estos criterios.

Cuentas diversas

Este subgrupo, que totaliza 18.803 millones de pesetas, está integrado por las cuentas "Otros Entes" con 16.122 millones, "Partidas pendientes de aplicación" con 309 millones y "Operaciones en curso" con 2.371,5 millones.

La cuenta "Otros Entes", que representa un 47,2% del total activo del balance de situación, está compuesta por dos cuentas de relación con extinguidas Mutualidades de previsión social de funcionarios (Mutualidad de la Previsión del extinguido INP y Mutualidad de Previsión del extinguido Mutualismo Laboral) con una deuda con la Seguridad Social de 8.740,7 y 7.381,6 millones de pesetas, respectivamente. Al igual que en ejercicios anteriores, es de destacar el incremento que en 1990 ha experimentado el saldo correspondiente a la cuenta representativa de la deuda de la Mutualidad de Previsión del extinguido Mutualismo Laboral, que ha supuesto un 34,4% respecto del saldo a 31.12.1989. De los datos y antecedentes disponibles en este Tribunal en relación con dichas deudas se deduce que no se han llevado a cabo actuaciones conducentes a su materialización o regularización. De otra parte, en relación con el cumplimiento de la normativa reguladora de la integración del patrimonio de dichas Mutualidades en la Seguridad Social, hay que señalar que no se tiene constancia de que se haya producido la misma y consiguientemente el cese de aportaciones de la Seguridad Social a tales Entidades.

La cuenta "Partidas pendientes de aplicación", de signo deudor, refleja un saldo de 307 millones de pesetas en la divisionaria "Partidas pendientes de aplicación. Otras cuentas" y de 2 millones en "Diferencias de conciliación entre Entidades de la Seguridad Social". Si se tiene en cuenta la composición de estos saldos, que son el resultado neto de partidas de uno y otro signo, y además los que figuran de signo acreedor en el pasivo del balance, en los que concurren similares circunstancias, se obtendrían los siguientes importes, en millones de pesetas:

	Según el balance de la Entidad		Según el carácter de las partidas	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
Partidas pendientes de aplicación. Otras cuentas	307	394	605	692
Diferencias de conciliación	2	75	104	177
T O T A L	309	469	709	869

En la divisionaria "Partidas pendiente de aplicación. Otras cuentas" se integra la denominada "Saldo apertura ejercicio corriente en Servicios Centrales" con un saldo neto deudor de 255 millones de pesetas, en el que figuran partidas cuyo origen se remonta hasta el ejercicio 1979 y cuyos conceptos no son adecuados a la referida denominación.

Pasivo

Acreedores diversos

En esta cuenta, en la que figura un saldo de 3.780 millones de pesetas (importe similar al del ejercicio anterior), se integran nueve divisionarias de primer grado de muy diversa naturaleza, entre las que destaca la denominada "Operaciones en trámite de formalización", cuyo saldo supone un 92,3% de aquél (3.489 millones). Esta subcuenta se subdivide, a su vez, en otras múltiples de contenido heterogéneo entre las que destacan las representativas de los "Fondos de previsión complementarios" por aportaciones de funcionarios y de la Administración de la Seguridad Social, con 1.827 millones, y la de "Partidas a compensar con Entidades sustitutorias", que asciende a 1.131 millones y que corresponde a saldos residuales de Entidades integradas en el Régimen General de la Seguridad Social. En los inventarios se observan anomalías tales como conceptos indeterminados, partidas procedentes de ejercicios anteriores que no experimentan modificación alguna, acreedores perfectamente identificados cuyos derechos no se satisfacen después de varios ejercicios y apuntes de signo contrario a la naturaleza de la cuenta sin justificación adecuada.

Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar

Presenta un saldo de 21.242 millones de pesetas, de los cuales 21.156 corresponden a impuestos pendientes de liquidar a la Hacienda Pública y 86 a cuotas de la Seguridad Social también pendientes de liquidación.

Los inventarios por Direcciones Provinciales no son homogéneos en su presentación y contenido y, en algún caso, están indeterminados los conceptos y existen algunas partidas de fechas anteriores al período legalmente establecido para liquidar a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública las respectivas aportaciones.

Acreedores por prestaciones

Presenta un saldo de 260 millones de pesetas, a pesar de que la instrucción dictada por la Intervención General de la Seguridad Social respecto a las devoluciones, retrocesiones y anulaciones de prestaciones económicas no contempla anotaciones contables en esta cuenta. Del análisis del inventario no se deduce qué tipo de operaciones económicas se imputan.

No se aceptan las alegaciones a las observaciones que anteceden. En éstas no se afirma que la cuenta contenga devoluciones, retrocesiones y anulaciones de prestaciones, por el contrario, se señala desconocer el tipo de operaciones registradas. Las alegaciones exponen una situación de hecho que se produce en algunas Direcciones Provinciales para formalizar operaciones que son propias de obligaciones contraídas.

Partidas pendientes de aplicación

Esta cuenta figura en el pasivo con un saldo de 469,5 millones de pesetas, importe que está integrado por 394,4 millones que registra la divisionaria "Otras cuentas" y 75 millones de "Diferencias de conciliación" entre Entidades de la Seguridad Social. Es de aplicación a esta rúbrica lo manifestado en relación con la de igual denominación que figura en el activo.

II.2.2.2.- Instituto Nacional de la Salud

Activo

Inmovilizado material

En este subgrupo de cuentas el Instituto Nacional de la Salud presenta saldos en: "Instalaciones" con un importe bruto de 15.038 millones de pesetas y amortizaciones por 3.194 millones, "Mobiliario y material no móvil" con 124.895 y 52.861 millones, respectivamente, y "Material móvil" con 708 y 222 millones, también respectivamente.

No se ha recibido inventario alguno de "Instalaciones" y "Mobiliario y material no móvil", figurando solamente el saldo contable desglosado por centros. Los saldos representativos de las amortizaciones tampoco están distribuidos por centros.

En relación con estas cuentas y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.b de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido un gran volumen de documentación procedente de los distintos centros de gestión de esta Entidad, con excepción de los relativos a las provincias gallegas y Navarra, siendo incompleta la documentación de varias provincias, entre las que destaca Madrid.

La información recibida, que tiene una composición heterogénea, no constituye inventarios físicos de los bienes en uso debidamente valorados y con las amortizaciones correspondientes imputadas. Entre los defectos más significativos apreciados se destacan: falta de criterios homogéneos en la confección de inventarios por los distintos centros, saldos sin justificar, falta de fechas de adquisiciones, ausencia de bajas, bienes sin identificar, falta de información sobre amortizaciones, relaciones de bienes sin referencia a los centros de ubicación etc.

No obstante lo anterior, la recopilación de antecedentes y los análisis iniciados por la Entidad constituyen tareas básicas para la consecución del objetivo que establece la citada Resolución.

En "Material móvil" se ha elaborado un inventario en el que constan los vehículos debidamente identificados pero sin consignar la fecha de adquisición correspondiente y sin imputar a cada uno de ellos la amortización practicada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.a de la Resolución de la Comisión Mixta se ha recibido durante el trámite de alegaciones nuevo inventario en el que constan las fechas de adquisición y las amortizaciones distribuidas por vehículos.

Inmovilizaciones en curso

Figuran con saldo en este subgrupo de cuentas: "Inmuebles en construcción" con 23.746 millones de pesetas e "Instalaciones en montaje" con 4.575 millones. De la información complementaria recibida como documentación justificativa de estos saldos se deduce que, aunque incluya el detalle por centros, no están debidamente identificadas las obras y bienes que constituyen esta masa patrimonial, ni consignadas las fechas origen de las operaciones que dan lugar a dichos saldos, datos fundamentales para su adecuado seguimiento y control.

De la comparación de saldos respecto del ejercicio anterior se destaca el incremento significativo de ambas rúbricas: un 46,3% y 41%, respectivamente.

Por otra parte, hay que señalar que permanece inalterable, el 57% (1.850 millones de pesetas) del saldo del ejercicio 1989, de la cuenta "Instalaciones en montaje".

En relación con la cuenta "Instalaciones en montaje" y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.b de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido inventario en el que figuran los datos fundamentales para la identificación, seguimiento y control de los bienes que lo integran.

Aprovisionamientos y suministros

El saldo de este subgrupo al cierre del ejercicio asciende a 6.647 millones de pesetas, cifra que supone una importante reducción en el nivel de existencias respecto del ejercicio anterior (53,9%). Al igual que en años anteriores, como ya viene siendo habitual, se producen saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, llegando en algunos supuestos a afectar al saldo total neto de las divisionarias. Es el caso de "Víveres" con 59 millones de pesetas de signo acreedor y de "Material sanitario. Implantes" con 275 millones del mismo signo. Esta situación se hace más generalizada en un análisis pormenorizado de saldos de centros sanitarios en los que aparece esta irregularidad en numerosas rúbricas. Por otra parte, no se han recibido inventarios físicos justificativos de las existencias en almacén.

En relación con estas cuentas y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.b de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido documentación complementaria relativa a los centros sanitarios de la Entidad, con excepción de las provincias gallegas y Navarra y de algunos de Madrid. Se ha documentado aproximadamente el 50% del saldo contable, aunque no es significativo este dato por los numerosos saldos negativos que figuran en estas cuentas.

Los inventarios recibidos no son coincidentes en general con los saldos contables y en los casos en que estas diferencias se justifican, la causa que se alega sin excepción, es la insuficiencia de crédito, circunstancia que impide legalmente formalizar las adquisiciones y contabilizar las entradas de bienes en almacén. Por consiguiente, los inventarios incluyen recepciones de aprovisionamientos que no son propiedad de la Seguridad Social, al igual que no se formalizan como gasto todos los consumos efectuados en el ejercicio. Estos hechos, de gran repercusión en la gestión económica y financiera de la Seguridad Social, están dando lugar a compromisos con terceros de importes muy elevados sin el adecuado reflejo contable.

Deudores

Figuran saldos en la cuenta de "Deudores diversos" con un importe de 1.832 millones de pesetas y en la de "Deudores por prestaciones" con 36.745 millones.

En "Deudores diversos" la deuda de la Diputación Provincial de Santander, que asciende a 1.498 millones de pesetas, constituye el principal componente del saldo, que se ha incrementado ligeramente en 1990 (un 6,8 %). En esta cuenta siguen figurando sin variación las deudas de la Cruz Roja de Melilla por gastos de su guardería infantil y las del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social derivadas de los gastos realizados en el apeadero del Hospital Ramón y Cajal, pendientes de cancelar desde el año 1979, y ya referidas en Informes anteriores. Asimismo, permanecen las anomalías denunciadas respecto a la existencia de partidas contrarias a la naturaleza de la cuenta y conceptos de los inventarios sin explicar suficientemente.

Por lo que se refiere a la cuenta "Deudores por prestaciones", en la que se ha producido un incremento del saldo de 4.741 millones de pesetas, son aplicables las observaciones expuestas para la cuenta anterior y también puestas de manifiesto en Informes precedentes: partidas en las que el deudor figura perfectamente identificado sin variación durante años, deudores sin identificación y partidas contrarias al significado de las cuentas.

Hay que señalar también que los Hospitales "La Paz" y "12 de Octubre" siguen careciendo de inventarios explicativos del contenido de esta cuenta. Sus saldos, que en conjunto ascienden a 5.976 millones de pesetas, suponen el 74,80% del saldo de la Dirección Territorial de Madrid y el 16,3% del total de la Entidad.

Todo lo cual evidencia la necesidad de efectuar un análisis específico de esta masa patrimonial con objeto de que los saldos contables representen la situación real de la misma, teniendo en cuenta que existen mecanismos legales que permiten subsanar tales deficiencias.

En relación con estas cuentas y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido inventarios de los Hospitales "La Paz" y "12 de Octubre" en los que se presentan los defectos y carencias señalados con carácter general en los párrafos que preceden y que, por consiguiente, requieren también de las actuaciones complementarias indicadas.

Tesorería

En las cuentas de tesorería figuran "Caja" y "Bancos" con un saldo de 27 y 286 millones de pesetas, respectivamente. Destacan, por lo que respecta a la primera, diversas incidencias relativas a conciliaciones y fechas de arqueo, así como la inclusión en el saldo contable de Caja como existencias a justificar de salidas de efectivo que deberían formalizarse como tales. En Bancos se producen también algunas anomalías que se refieren a saldos acreedores en cuatro Direcciones Provinciales y a diferencias de conciliación entre el saldo contable y la certificación bancaria no justificadas suficientemente.

Por otra parte, sigue figurando cuenta abierta en el Banco de España a nombre del Hospital "Santa Cristina" infringiéndose el principio de caja única.

Por lo que respecta al Fondo de maniobra, se observa conciliación entre las distintas cuentas que intervienen en su funcionamiento, pero no existe coincidencia entre el importe que la Tesorería General de la Seguridad Social comunica como Fondo autorizado y el que figura como tal en la Contabilidad de la Entidad en la Dirección Provincial de Madrid y en los Servicios Centrales. En el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, se observa, además, que se utilizan indebidamente recursos a favor de Tesorería General de la Seguridad Social para financiar pagos del Fondo.

Es de aplicación lo manifestado en el INSS en cuanto a la falta de uniformidad en el tratamiento contable de las operaciones del Fondo por las distintas Entidades. El SICOSS a partir del ejercicio 1993 prevé unificar estos criterios.

Cuentas diversas

Figura en este subgrupo la cuenta "Partidas pendientes de aplicación" con un saldo de 20.297 millones de pesetas, desglosado en las divisionarias "Otras cuentas" con 20.081 millones y "Diferencias de conciliación entre Entidades del Sistema de la Seguridad Social" con 216 millones.

En "Partidas pendientes de aplicación. Otras cuentas" el 96,1% (19.299 millones de pesetas) corresponde a pagos realizados sin cobertura presupuestaria, de los que 14.564 millones son del propio ejercicio 1990 y 4.735 millones del ejercicio 1989. Del resto del saldo hay que destacar la cuenta de enlace entre Centros Sanitarios, "Operaciones de Residencias y Ambulatorios", con un importe de 162 millones correspondiente a diez Direcciones Provinciales o Territoriales, entre las que destacan Las Palmas con 67 millones y Madrid con 64 millones. Los importes de estos saldos no son significativos, ya que constituyen el resultado neto de múltiples partidas de uno y otro signo que, en el caso de la Dirección Territorial de Madrid, proceden de ejercicios incluso anteriores a 1980.

En "Diferencias de conciliación entre Entidades del Sistema de la Seguridad Social" figura un saldo neto de 216 millones de pesetas, que también está integrado por subsaldos y partidas de uno y otro signo y que tampoco es representativo. En este saldo las diferencias de conciliación procedentes del ejercicio 1983 representan casi un 50% del mismo y las restantes corresponden en su totalidad a fechas anteriores a 1989.

En general, en estas cuentas figuran partidas de naturaleza perfectamente definida que tienen su ubicación adecuada en otras rúbricas del Balance, tal es el caso de cuotas de Seguridad Social, cobros a deudores de Instituciones Sanitarias, amortizaciones, etc.

Pasivo

Acreedores

Este subgrupo está integrado por las cuentas "Acreedores diversos" con 7.779 millones de pesetas, "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" con 24.611, "Obligaciones contraídas" con 29.493 y "Residuos presupuestos cerrados" con 7.144.

En "Acreedores diversos" la partida fundamental, que representa el 85% del saldo (6.613 millones de pesetas), corresponde a la deuda derivada de las operaciones de relación de esta Entidad con la extinguida Administración Institucional de la Sanidad Nacional, que permanece invariable desde 1986. Del resto de los componentes de esta rúbrica merece destacarse el carácter heterogéneo de las partidas en ella ubicadas (son numerosos los casos de diferencias de conciliación), partidas de signo contrario a la naturaleza de la cuenta sin suficiente justificación, y conceptos indeterminados en los inventarios. En esta cuenta debieran figurar acreedores extrapresupuestarios y no pasivos ficticios que han de someterse a procesos de análisis y, en su caso, a regularización.
En "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" figuran numerosas retenciones de fechas anteriores a las que son preceptivas para proceder a la liquidación correspondiente, en algunos casos con varios años de antigüedad, y diferencias entre contracciones y liquidaciones que constituyen partidas integrantes de los saldos a los que procede aplicarles la regularización pertinente. Destacan por sus anomalías las Direcciones Territoriales de Sta. Cruz de Tenerife y Madrid y la Dirección Provincial de las Palmas. La cuenta representativa del Impuesto sobre Tráfico de Empresas figura con saldo en quince Direcciones Provinciales o Territoriales en las que el tributo no es de aplicación desde el ejercicio 1986, lo que pone de manifiesto el incumplimiento de la legislación aplicable. En la Dirección Provincial de Las Palmas figuran a su vez 19 millones procedentes de diferencias entre formalizaciones contables y liquidaciones practicadas, sin que conste desglose ni la fecha de procedencia.

En "Residuos de presupuestos cerrados" un 10% del saldo que se ha citado procede de los ejercicios 1982 a 1985, sin que se justifique la permanencia de estas obligaciones, no obstante su antigüedad y la existencia de cauces legales para su regularización o baja en contabilidad. Por Centros, gran parte del saldo global (un 39,3%) corresponde a la Dirección Territorial de Madrid y en su composición por conceptos se observa la existencia de numerosas partidas contrarias a la naturaleza del mismo, otras impropias del significado de la cuenta (amortizaciones de inmovilizado), así como la permanencia de algunas relativas a préstamos hipotecarios antiguos y a cotizaciones a la Seguridad Social, que deberían estar canceladas o regularizadas, a tenor de la fecha de procedencia.

Fianzas y depósitos recibidos

El subgrupo tiene un saldo de 62 millones de pesetas, de los cuales 15 corresponden a "Fianzas recibidas" y 47 a "Depósitos recibidos". En estas rúbricas es destacable la indeterminación de los depositarios en diversos casos, la existencia de algunas partidas de signo contrario a la naturaleza de la cuenta, por devoluciones practicadas (por su importe destaca 5,6 millones de la Dirección Territorial de la Rioja), lo que evidencia formalizaciones contables inadecuadas. Asimismo, figuran partidas muy antiguas sin que se justifique su permanencia en cuentas.

Cuentas diversas

En este subgrupo figuran con saldo la cuenta de relación de esta Entidad con la Tesorería General de la Seguridad Social, con un importe de 106.058 millones de pesetas, y la de "Partidas pendientes de aplicación" con 3.173 millones, esta última subdividida en las divisionarias "Otras cuentas" con 2.656 millones y "Diferencias de conciliación entre Entidades del Sistema de la Seguridad Social" con 517 millones.

En "Partidas pendientes de aplicación. Otras cuentas" figuran conceptos muy diversos entre los que destacan "Ingresos pendientes de traspasar a Tesorería" (2.253 millones de pesetas), "Giros postales y remesas" (176 millones) y "Proveedores" (156 millones que corresponden en su práctica totalidad a operaciones anteriores a 31.12.1989), cuenta esta última que debería figurar en otro grupo del balance, si es que su saldo verdaderamente representa deudas con suministradores habituales de fechas anteriores a la aplicación de la contabilidad presupuestaria en la Seguridad Social. Del análisis de los inventarios se deduce que es generalizada la existencia de partidas que debieran ser objeto de expedientes de baja en Contabilidad, teniendo en cuenta su antigüedad, invariabilidad, presencia de partidas de signo contrario a la naturaleza de la cuenta, etc.

En "Giros postales y remesas" el Hospital "La Paz" representa el 49% del saldo de la Entidad y, como se ha señalado en Informes anteriores, este centro continúa formalizando ingresos con abono a esta cuenta, en lugar de aplicarlos a la cancelación de las deudas origen de tales ingresos. En el resto del saldo son frecuentes las partidas que por su antigüedad requieren una aplicación definitiva, o baja en contabilidad.

En la divisionaria "Partidas en trámite de consulta" figura un saldo de 68,6 millones de pesetas, lo que contraviene las instrucciones cursadas para el cierre de operaciones del ejercicio, según las cuales aquella debe quedar cancelada por aplicación definitiva de las correspondientes partidas, previa resolución de las oportunas consultas. No obstante, son quince las provincias que figuran con saldo, destacando la de Madrid, en la que son significativos los importes de los Hospitales "La Paz" y "Puerta de Hierro" con 132,6 millones de signo acreedor y 56,7 millones de signo deudor, respectivamente.

Entre las subcuentas representativas de ingresos pendientes de traspasar a la Tesorería General de la Seguridad Social destaca la de "Ingresos por servicios prestados a traspasar a Tesorería General", con un saldo de 2.161 millones de pesetas, en el que participan con especial relevancia las provincias de Las Palmas (61,7%) y Madrid (19,2%). En cumplimiento de la recomendación contenida en las instrucciones de cierre de operaciones del ejercicio, dicha subcuenta y la también divisionaria "Ingresos diversos a traspasar a Tesorería General", con un saldo de 87 millones, deberían figurar sin saldo, de lo que dista mucho la situación señalada, tanto por la magnitud de las cifras como por el ejercicio de procedencia de algunas partidas (1988 y 1989).

II.2.2.3.- Instituto Nacional de Servicios Sociales

Activo

Inmovilizado material
Este subgrupo de cuentas presenta un saldo neto en el Instituto Nacional de Servicios Sociales de 6.541 millones de pesetas que responde a la siguiente composición: "Terrenos y solares" con 1,5 millones, "Instalaciones" con 1.197 millones de valor bruto y 654 de amortización acumulada, "Mobiliario y material no móvil" 8.143 millones de valor bruto y 2.278 de amortización acumulada y "Material móvil" con 189 y 58 millones de valor bruto y amortización acumulada, respectivamente.

El saldo de la cuenta "Terrenos y solares" figura indebidamente en la contabilidad de esta Entidad Gestora, ya que debería haberse traspasado a la Tesorería General de la Seguridad Social antes del cierre del ejercicio.

Se ha recibido, como consecuencia de la Resolución de la Comisión Mixta, nota informativa en la que consta que el traspaso al que se acaba de aludir se efectúa en el ejercicio 1991.

En la cuenta de "Instalaciones", de la que no se ha recibido inventario justificativo de su saldo, se observan respecto a su movimiento en el ejercicio 1990 incidencias similares a las del ejercicio anterior: en numerosos centros los fondos de amortización superan los valores de activo, saldos de amortización acumulada donde no existen saldos contables de instalaciones (un Centro) y, por el contrario, centros con estos activos que no presentan saldos en las cuentas representativas de los fondos de amortización. En el ejercicio 1990 no se dotan amortizaciones para esta masa patrimonial, al igual que ya sucedió en el ejercicio anterior.

En "Mobiliario y material no móvil", cuenta que no se ha documentado con los preceptivos inventarios, se producen en menor medida que en "Instalaciones" las anomalías denunciadas. En esta cuenta, en cuatro centros de los doce que han remitido balances desagregados, existe discordancia entre los saldos en ellos consignados y los detalles correspondientes del balance de situación de la Entidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.b de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido inventarios de "Mobiliario y material no móvil" de la mayor parte de los centros de esta Entidad. Se sigue careciendo de los relativos a los Servicios Centrales y a veintiséis centros de gestión que presentan saldos en esta cuenta por importe de 1.734 millones de pesetas. Los inventarios no son coincidentes en ningún caso con los correspondientes saldos contables, las diferencias netas pueden cuantificarse en 520 millones que a su vez se desglosan en 2.845 millones de inventarios con menor valor que la contabilidad y 2.325 millones que exceden al importe de la misma. Los fondos de amortización figuran pendientes de imputación. No obstante los defectos mencionados, las actuaciones llevadas a cabo suponen un avance significativo y una fase necesaria para la obtención de inventarios físicos correctos.

A "Material móvil" le son de aplicación las observaciones formuladas respecto a la falta de control de las dotaciones a fondos de amortización y a la carencia de inventarios identificativos de los vehículos.

Respecto de esta última cuenta del inmovilizado material, la información recibida en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Mixta sigue adoleciendo de falta de identificación adecuada de los vehículos (nº de matrícula en todos los casos y fechas de adquisición, marcas,

destinos, etc. en numerosos elementos), imputación de las correspondientes amortizaciones y conciliación con los saldos contables, en relación con los cuales se observa diferencia en doce centros.

Inmovilisaciones en curso

En este subgrupo figuran con saldo las cuentas "Inmuebles en construcción" con 14.136 millones de pesetas, "Estudios y proyectos en curso" con 4 millones e "Instalaciones en montaje" con 14 millones.

Respecto de "Inmuebles en construcción", aunque su saldo figura detallado por centros, no se han recibido inventarios identificativos de los bienes que integran esta masa patrimonial. Del movimiento contable del ejercicio 1990 se deduce que se han realizado inversiones por 8.758 millones de pesetas y que se han traspasado a la Tesorería General 6.895 millones como inmuebles terminados en el ejercicio. Sin embargo, del detalle elaborado por la Entidad en el que figuran estos inmuebles traspasados y de la información recibida de dicho Servicio Común, se deduce que la mayoría ya figuraban inventariados en el mismo y que una buena parte de ellos siguen formando parte a su vez del saldo de "Inmuebles en construcción" del INSERSO, lo que significa que las incorporaciones de éstos a "Inmuebles" no reciben el tratamiento contable que les es de aplicación, y que se están produciendo de forma fraccionada. En esta cuenta figuran gran número de centros con saldos relativos a Comunidades Autónomas con servicios sociales transferidos. En menor medida esto también sucede en el resto de los conceptos del "Inmovilizado material".

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.a) de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido un desglose de los saldos contables de los centros, en el que las obras en curso siguen sin estar identificadas, detectándose en algunos casos la inclusión de gastos impropios de esta rúbrica.

La Entidad comunica estar realizando tareas de revisión y regularización, lo que se estima necesario, puesto que la información aportada constituye una fase preliminar de las tareas a realizar.

Por lo que se refiere a "Instalaciones en montaje" y "Estudios y proyectos en curso", los saldos permanecen inalterables desde el ejercicio anterior y en su composición figuran numerosas partidas que proceden del ejercicio 1985, lo que demuestra la inexistencia de un seguimiento y control adecuado de estas cuentas de carácter transitorio.

Aprovisionamientos y suministros

La cuenta de "Existencias" presenta al cierre del ejercicio un saldo de 445 millones de pesetas, cifra que supone un incremento del 9,8% respecto al nivel del año anterior y que figura distribuida en varias divisionarias, entre las que destacan por su cuantía global las que recogen el concepto de víveres, con un montante de 141 millones (el 31,7%), y la relativa a material diverso, que asciende a 145 millones (32,6%). Se han recibido inventarios que representan el 47,3% del total de existencias, correspondientes a 34 de los 73 centros que figuran con saldo contable (el total centros de la Entidad asciende a 103). En el análisis de esta información se ha detectado falta de homogeneidad en la presentación de datos, aplicaciones contables inadecuadas de algunas partidas y valoraciones con criterios dispares (última compra, precio medio).

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.b de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido el resto de inventarios, apreciándose incidencias del mismo tenor que las referidas anteriormente.

Deudores

En este subgrupo el saldo por importe de 523 millones de pesetas se desglosa en diversas divisionarias que en términos generales están mal documentadas: falta de inventarios, inventarios con defectos sustanciales (conceptos indeterminados, sin fecha de origen, partidas de signo contrario al propio de la cuenta sin justificar), falta de conciliación entre cuentas compensatorias y profusión de partidas de ejercicios con varios años de antigüedad sin que se proceda a su materialización o, en su caso, regularización.

Por su cuantía destaca la subcuenta "Facturación a beneficiarios por servicios prestados" con un saldo de 257 millones de pesetas que, junto con "Cobro indebido de prestaciones" cuyo saldo asciende a 122 millones, debería figurar en el concepto "Deudores por prestaciones", aplicándose el principio del devengo en lugar de compensarse con otra cuenta de "Acreedores diversos". Se incluye también en esta cuenta un saldo de "Diferencias de conciliación con Entidades" cuya rúbrica adecuada en el balance pertenece al subgrupo de "Cuentas diversas".

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta, se han completado los inventarios de las distintas subcuentas de este subgrupo, si bien su contenido presenta los defectos ya enumerados.

Tesorería

El saldo de este subgrupo al cierre del ejercicio 1990 asciende a 33,4 millones de pesetas, de los cuales 1,9 figuran en la cuenta de "Caja" y 31,5 corresponden al saldo en Entidades financieras (Bancos y Cajas de Ahorro).

La documentación acreditativa del efectivo en Caja sigue adoleciendo en algunos casos de las omisiones denunciadas en el Informe de 1989 (faltan actas de arqueo de varios Centros, las fotocopias recibidas de otros varios figuran sin compulsa o autentificación y algunos centros registran diferencia entre el saldo contable y acta de arqueo, sin explicar o justificar). Respecto a la cuenta de "Bancos y Cajas de Ahorros", también se observa la existencia de diferencias sin justificación entre el saldo contable de algunos centros y el que figura en los correspondientes extractos o certificados bancarios. Asimismo, varios centros reflejan saldo de signo acreedor, contrario al de la naturaleza de la cuenta.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que anteceden. Varios Centros sin saldo contable no han remitido actas de arqueo, en tanto que otros en igual circunstancia sí han procedido a su envío. Respecto a las diferencias entre saldo contable y actas de arqueo hay que señalar la existente en un Centro de Madrid, además de la que según alegaciones se localiza en una Dirección Provincial.

En relación con el Fondo de maniobra hay que señalar que, al igual que en el ejercicio precedente, se observa falta de conciliación en numerosos centros. La diferencia global entre el importe autorizado por la Tesorería General y el que reflejan las cuentas representativas del mismo asciende a 14,6 millones de pesetas, siendo muy dispar la naturaleza de los conceptos que motivan la misma (talones pendientes de cargo, ingresos indebidos en la cuenta de pagos, etc). También como en el ejercicio anterior, en 1990 las desviaciones más trascendentes se localizan en la Dirección Provincial de Madrid y en los Servicios Centrales, lo que evidencia una falta de seguimiento y control de las operaciones concernientes al Fondo.

Es de aplicación lo manifestado en el INSS en cuanto a la falta de uniformidad en el tratamiento contable de las operaciones del Fondo por las distintas Entidades. El SICOSS a partir del ejercicio 1993 prevé unificar estos criterios.

Cuentas diversas

Integran este subgrupo, cuyo saldo asciende a 403,9 millones de pesetas, la cuenta "Partidas pendientes de aplicación" que presenta un saldo de 399,5 millones y la cuenta "Operaciones en curso" con un saldo de 4,4 millones, ambas de carácter transitorio. Dichos saldos, como ya se ha indicado en otros apartados del Informe relativos a las mismas rúbricas, no reflejan adecuadamente la situación activa o pasiva de la Entidad en relación con las operaciones que en ellas deben registrarse, al no haberse efectuado la debida separación entre las partidas deudoras y acreedoras y, en consecuencia, ser aquellos el resultado de la compensación entre cargos y abonos practicados en las mismas.

De otra parte, ambas cuentas presentan las carencias ya observadas en Informes anteriores, en cuanto a falta de inventarios, o, en su caso, indeterminación de conceptos y omisión de las fechas origen de las operaciones, apuntes de signo contrario al propio de la cuenta sin justificar y partidas de origen muy antiguo (ejercicios 1980, 1981, 1982, 1983, etc.), lo que contraviene la naturaleza o carácter transitorio de las cuentas. En cuanto a su localización, estas anomalías aparecen en numerosos centros de las distintas Direcciones Provinciales, sobresaliendo por la magnitud de sus saldos Madrid y Murcia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.f de la Resolución de la Comisión Mixta, se han subsanado la mayor parte de las carencias de información relativas al contenido de estas cuentas, del que se deduce que las operaciones formalizadas son de naturaleza muy diversa y en muchos casos con varios años de antigüedad. Permanecen pendientes actuaciones para la aplicación finalista o regularización de estas cuentas.

Pasivo

Préstamos recibidos externos

El saldo de este subgrupo (3,8 millones de pesetas), correspondiente en su totalidad a la cuenta "Préstamos recibidos", refleja el importe pendiente de amortizar a favor del Instituto Nacional de la Vivienda por la compra al mismo de un inmueble en el año 1971 por valor de 15,3 millones, según la información de que se dispone en este Tribunal.

Dada la naturaleza de la operación, la misma no responde a la concesión de un préstamo a la Entidad, sino a la adquisición de un bien con pago aplazado, por lo que se considera inadecuado el reflejo de la deuda pendiente en este subgrupo, al que fue traspasado desde "Acreedores diversos" en el ejercicio 1987. De otra parte, la amortización del ejercicio 1990 representa el 50% de la cuota que regularmente se ha venido aplicando a tal fin, y también prácticamente la mitad de la cifra presupuestada, extremos sin justificar.

La información complementaria recibida en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Mixta no modifica las observaciones que preceden.

Acreedores

Las cuentas que componen este subgrupo totalizan un saldo de 5.413 millones de pesetas, distribuido como sigue: "Acreedores diversos" 453, "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" 836, "Acreedores por prestaciones" 30, "Obligaciones contraídas" 3.479 y "Residuos de presupuestos cerrados" 615.

La cuenta "Acreedores diversos" está integrada por numerosas divisionarias que, en materia de inventarios, adolecen de los defectos y anomalías ya referidos al tratar de la cuenta de "Deudores diversos", con la que está inadecuadamente interrelacionada por vía de compensación a través de las subcuentas

denominadas "Ingresos a liquidar por servicios prestados", con un saldo de 257 millones de pesetas (contrapartida de la divisionaria de Deudores diversos "Facturación a beneficiarios por servicios prestados"), y "Prestaciones pendientes de reintegro a Tesorería Territorial" con un saldo de 121 millones (contrapartida de la subcuenta de activo "Cobro indebido de prestaciones"). Asimismo, figuran como divisionarias la subcuenta "Diferencias de conciliación", que debería formar parte de la cuenta "Partidas pendientes de aplicación" correspondiente al subgrupo "Cuentas diversas", y la subcuenta "Retenciones sobre certificaciones y facturas", que debería ser componente del subgrupo "Fianzas y depósitos recibidos".

En "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" el saldo más significativo es el de la subcuenta "I.R.P.F. a pagar" con un importe de 646 millones de pesetas (77,2%), de los cuales 114,7 pertenecen a los Servicios Centrales y 85,7 a la Dirección Provincial de Madrid. Tanto dicha subcuenta como las divisionarias "Cuotas de la Seguridad Social a pagar" e "I.G.T.E. a pagar", presentan las anomalías ya señaladas en cuanto a inventarios defectuosos o inexistentes en muchos centros, además de la permanencia de numerosas partidas relativas a deudas de ejercicios o períodos que ya deberían estar liquidadas, a tenor de la normativa aplicable en materia de impuestos y de cotización a la Seguridad Social. También en algún caso se han formalizado en la subcuenta representativa de "I.R.P.F. a pagar" retenciones de cuotas de Seguridad Social (Dirección Provincial de León).

En "Acreedores por prestaciones" figura un saldo de 30 millones de pesetas, cifra de la que un 52,6% corresponde a los Servicios Centrales, donde permanecen en inventario partidas que ya figuraban al cierre del ejercicio 1987. En otros centros algunos saldos son de signo contrario al de la naturaleza de la cuenta y la documentación enviada adolece, en general, de falta de información, al contener meros resúmenes o movimientos de la cuenta sin detalle de las partidas que la integran. De otra parte, como ya se puso de manifiesto en la misma rúbrica del INSS, la existencia de dicho saldo supone la inobservancia o aplicación indebida de las Instrucciones cursadas por la Intervención General de la Seguridad Social en materia de retrocesiones, devoluciones y anulaciones de prestaciones económicas, dado que aquellas no establecen formalización alguna en la cuenta por tales operaciones.

"Obligaciones contraídas" presenta un saldo derivado de operaciones del ejercicio 1990 de 3.478,7 millones de pesetas distribuido en tres subcuentas: "Por sostenimiento de Centros" (486,8 millones), "Adquisición material inventariable" (301,7 millones) y "Varios" (2.690,2 millones). En general la mayoría de los centros no han aportado las correspondientes relaciones nominales de acreedores acreditativas de los respectivos saldos. En materia de formalización de operaciones existen supuestos en los que las mismas no se han registrado en la divisionaria oportuna, o se han contabilizado en su totalidad en "Varios" (Badajoz, Servicios Centrales).

La cuenta "Residuos de presupuestos cerrados" que comprende obligaciones contraídas hasta 31.12.1989 y en la que el 69% del saldo (425 millones de pesetas) corresponde a la Dirección Provincial de Madrid, presenta también en varios centros las anomalías reseñadas en las otras rúbricas del subgrupo: permanencia de partidas antiguas, falta de inventarios y/o relaciones nominales de acreedores y formalización indebida de obligaciones para las que existe rúbrica específica al efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido documentación complementaria que, con la excepción de las cuentas "Obligaciones contraídas" y "Residuos de presupuestos cerrados", completa la práctica totalidad de las carencias de información sobre el contenido de las cuentas de este subgrupo. Los defectos que se aprecian se refieren a acreedores con varios años de antigüedad o a partidas que representan pasivos ficticios que requieren actuaciones para su baja en contabilidad. Por lo que se refiere a la cuenta "Obligaciones contraídas" no se ha recibido nueva documentación y en relación con la cuenta "Residuos de presupuestos cerrados" se ha complementado parcialmente, permaneciendo un 68% del saldo a 31.12.1990 pendiente de justificación.

No se aceptan las alegaciones formuladas. En el párrafo que antecede ya se incluye el resultado del análisis de la documentación a que se hace referencia en las mismas.

Cuentas diversas

Este subgrupo refleja un saldo de 16.683 millones de pesetas, de los que 16.604 millones (99,5%) corresponden a la cuenta de relación "Tesorería General c/c" y 79 millones a la de "Partidas pendientes de aplicación", cuenta ésta para la que son válidas las observaciones formuladas en la de igual naturaleza del activo.

Cuentas de orden y especiales

Este grupo presenta un saldo global de 9.732 millones de pesetas distribuido en varias cuentas de carácter informativo, entre las que figura indebidamente la cuenta de "Proveedores", que como tal no tiene dicho significado y cuyo saldo (257 millones) figura en su práctica totalidad como obligaciones contraídas en la correspondiente cuenta de pasivo.

II.2.2.4.- Instituto Social de la Marina

Activo

Inmovilizado material

En este subgrupo de cuentas el Instituto Social de la Marina presenta saldo en "Inmuebles" por 9.055 millones de pesetas de valor bruto y amortizaciones por 2.064 millones, en "Instalaciones" 242 y 196 millones, respectivamente, en "Mobiliario y material no móvil" 3.302 y 850 millones y en "Material móvil" 72 y 5 millones, también respectivamente.

Esta Entidad en el ejercicio 1990 ha aportado inventarios con diferente nivel de información de las cuentas de esta masa patrimonial, con excepción de "Instalaciones", aunque en ningún caso están conciliadas con los correspondientes saldos del balance de situación.

Las diferencias aludidas se distribuyen del modo siguiente:

	Millones de Ptas.
Terrenos y solares	8
Inmuebles	714
Mobiliario y material no móvil	597
Material móvil	2

Las anomalías más destacables en los mencionados inventarios, con independencia de la ya mencionada falta de conciliación con los saldos contables, se refieren a: falta de fecha adquisición de los bienes, amortizaciones sin imputar a los mismos, inclusión de obras en curso en la relación de inmuebles terminados, conceptos inadecuados a la rúbrica en la que se imputan (inversiones en el buque "Esperanza del Mar", propiedad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se incluyen como "Inmuebles", gastos corrientes de bienes almacenables incluidos en "Mobiliario y material no móvil", valoraciones que no se refieren al precio de adquisición, e inclusión de otros considerados en desuso, etc.).

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados I.a y I.b de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido nuevos inventarios de "Inmuebles", "Terrenos y solares" y "Material móvil", y por primera vez el de "Instalaciones". Por lo que se refiere a "Mobiliario y material no móvil", no se han aportado nuevos datos. De la comparación de estos inventarios con los saldos del balance resultan las nuevas diferencias que a continuación se detallan:

	Millones de Ptas.
Terrenos y solares	*8*
Inmuebles	*831*
Instalaciones	*75*
Material móvil	*1*

La referida documentación incluye previsiones de ajustes y regularizaciones de saldos que en unos casos son meros traspasos entre cuentas y en otros suponen alteraciones del neto patrimonial. Asimismo, en las citadas previsiones se contempla la necesidad de que algunos de tales ajustes y regularizaciones se efectúen arbitrando soluciones globales y uniformes, tanto por lo que se refiere a los valores de activo como en materia de amortización, actuaciones que junto con el recuento físico de bienes se consideran imprescindibles para lograr que la representación contable de este inmovilizado se adecue a la realidad patrimonial.

Del análisis de la documentación aportada se deduce en general una mejora de la calidad de los inventarios, con las siguientes excepciones: "Instalaciones", que se confecciona por vez primera y que contiene en su mayor parte elementos impropios de esta cuenta e incluso gastos corrientes activados, y "Mobiliario y material no móvil", que permanece pendiente de revisión y conciliación.

Inmovilizaciones en curso

Integran este subgrupo las cuentas de "Inmuebles en construcción" con un saldo de 2.058 millones de pesetas y "Estudios y proyectos en curso" con un saldo de 3 millones (derivado en su totalidad de operaciones anteriores a 31.12.1989). En la rúbrica primera, que está en las mismas condiciones que la cuenta de "Inmuebles" con la que está relacionada, la diferencia existente entre su saldo en balance y el inventario recibido asciende a 865 millones. "Estudios y proyectos en curso" carece de justificación documental, al igual que en los casos antedichos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.a de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido nuevos inventarios de "Inmuebles en construcción" y "Estudios y proyectos en curso", cuyo contenido debería completarse con una información más amplia que permita la correcta identificación de las obras y proyectos en curso de realización. Dichos inventarios arrojan unas diferencias con los saldos contables de 832 y 13 millones de pesetas, respectivamente, y para su eliminación se aporta la previsión de las regularizaciones y ajustes contables pertinentes.

Préstamos concedidos a largo plazo

Al 31.12.1990 figuran con saldo en este subgrupo las cuentas "Préstamos sociales" con un importe de 1.220 millones de pesetas y "Deudores por créditos laborales" con 25 millones.

En "Préstamos sociales" permanecen sin resolver las anomalías manifestadas en Informes anteriores, a pesar de que esta Entidad ha realizado dos importantes regularizaciones (con contrapartida al Fondo de estabilización) con objeto de que la cuenta refleje adecuadamente los préstamos sociales a adjudicatarios de viviendas. Tal es el caso de la inclusión de intereses y comisiones en el principal de la deuda, la indeterminación de los atrasos de adjudicatarios con la debida diferenciación entre principal e intereses y la aplicación de partidas correspondientes a esta rúbrica en otras cuentas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.c de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha realizado por la Intervención General de la Seguridad Social un estudio sobre la situación real de los préstamos sociales de esta Entidad que se estima adecuado a los objetivos establecidos en dicha Resolución y que ha supuesto la confección de cuadros de amortización, la determinación de los importes cobrados hasta 31.12.1990, la cuantificación de posibles

atrasos de adjudicatarios de viviendas y un proyecto de regularización contable de las cuentas que intervienen en el proceso y que en resumen representa una baja en el neto patrimonial de 345 millones.

La cuenta "Deudores por créditos laborales", que fue sometida a regularización con fecha 1.1.1987, está documentada con un inventario contable que carece de fecha origen de las partidas, entre las que figura una que es considerada por la Entidad como de "imposible justificación" y cuyo valor, procedente de ejercicios anteriores, supone casi un 15% del saldo de la cuenta. De otra parte, hay que señalar que dicho saldo está integrado por "principal e intereses" y que en el transcurso del ejercicio 1990 han permanecido sin variación buena parte de los créditos concedidos, algunos de los cuales figuran sin amortización desde el origen.

Aprovisionamientos y suministros

Esta Entidad no formaliza operaciones en este subgrupo de cuentas, a pesar de que en su gestión se producen adquisiciones y consumos de bienes almacenables, lo que da lugar a la falta del adecuado reflejo contable de este área económica.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que anteceden. El Plan de Cuentas que se aplica en el ejercicio 1990 (R.D. 3261/1976, de 31 de diciembre) contempla la formalización de todas las Existencias sin exclusión de las de carácter administrativo. También la nueva normativa contable (SICOSS), de aplicación a partir de 1.1.1993, establece igual criterio.

No es el principio de importancia relativa que se cita en alegaciones el determinante de la formalización como existencias de los bienes almacenables, sino el hecho de que estos bienes, al margen de su valor, procedan de gastos administrativos o asistenciales.

Respecto al criterio de economicidad, también aludido en alegaciones, no resultaría lesionado por las formalizaciones contables de existencias puesto que se manifiesta tener establecidos controles extracontables de almacenes.

Deudores

Entre los deudores de la Entidad la cuenta "Deudores diversos" presenta un saldo de 76 millones de pesetas y la de "Deudores por prestaciones" 5 millones. La primera de ellas experimenta una baja en el ejercicio 1990 por medio de expediente de depuración de 817 millones, relativos a deudas del Instituto Español de Emigración, a pesar de la regularización que fue practicada en fecha 1.1.1987 para adecuar los saldos a la realidad. El saldo con que figura en balance corresponde en un 95,6% a la Dirección Provincial de Madrid y a una partida sin desglosar en concepto de "pagos delegados pendientes de abono" del ejercicio 1990.

En "Deudores por prestaciones" el inventario recibido contiene numerosas partidas de signo contrario a la naturaleza de la cuenta.

Tesorería

Presenta saldos de 20 millones y 101 millones de pesetas en "Caja" y "Bancos", respectivamente. En la cuenta de "Caja" el 85% del saldo (17 millones) corresponde a saldos de cuentas bancarias en el extranjero para atender gastos de los Centros allí ubicados. Por otra parte, en la Dirección Provincial de Baleares, al igual que en ejercicios anteriores, siguen utilizándose fondos procedentes de recursos a favor de Tesorería General de la Seguridad Social para financiar pagos del Fondo de maniobra.

En las cuentas de "Bancos", al igual que en los ejercicios anteriores, los Servicios Centrales presentan saldo contable en la cuenta bancaria especial de ingresos, , con los que se están financiando pagos del Fondo de maniobra.

De la conciliación del Fondo de maniobra destaca la diferencia que existe entre las dotaciones autorizadas por la Tesorería General y las que figuran como tales en la Entidad, que asciende a 41 millones de pesetas. A su vez están desconciliadas en Servicios Centrales y en siete Direcciones Provinciales (por un importe total neto de 2 millones) las igualdades de saldos que deben producirse entre las cuentas que intervienen en su funcionamiento.

Es de aplicación lo manifestado en el INSS en cuanto a la falta de uniformidad en el tratamiento contable de las operaciones del Fondo de maniobra por las distintas Entidades. El SICOSS a partir del ejercicio 1993 prevé unificar estos criterios.

Inversiones financieras

"Valores mobiliarios", con un saldo de 224 millones de pesetas, mantiene prácticamente la situación del ejercicio anterior por lo que se refiere a su composición. En dicho saldo los títulos procedentes de la incorporación de la Caja de Previsión del Personal de la Naviera Aznar, S.A. (Obligaciones hipotecarias emitadas por Naviera Aznar, S.A.) que representan el 95 %, figuran desde el ejercicio 1.984 sin variación. En efecto, de acuerdo con la información complementaria recibida en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1983, por el que se determina la integración de la Caja de Previsión del Personal de la Naviera Aznar, S.A. en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar, el Instituto Social de la Marina asumió la titularidad del patrimonio de dicha Caja como medio de compensar las obligaciones de pago de prestaciones derivadas de la integración.

Ese patrimonio estaba integrado por las partidas de activo que figuraban en el balance de la Caja de Previsión a 31 de diciembre de 1982, de las cuales el 93,1% estaba constituido por obligaciones emitidas por la propia Naviera Aznar. En concreto estas obligaciones son las siguientes:

- 3.277 obligaciones emitidas el 1 de junio de 1981, con un valor nominal de 163.850.000 pesetas, garantizadas con segunda hipoteca sobre el inmueble sede social de la Compañía; y
- 979 obligaciones emitidas en la misma fecha, con un valor nominal de 48.950.000 pesetas, garantizadas en tercera hipoteca sobre un buque de su propiedad.

Como consecuencia de la quiebra de Naviera Aznar, S.A., se produjeron los oportunos procedimientos de ejecución de los bienes de la compañía que garantizaban las obligaciones hipotecarias antedichas, sin que el ISM pudiera hacer efectivo el valor de las mismas, dada la existencia de acreedores de mejor derecho, que se adjudicaron en cobro de sus créditos preferentes tanto el edificio de la sede social de Naviera Aznar S.A. como el buque de la Compañía que garantizaban las referidas obligaciones hipotecarias.

En consecuencia al menos el 95% de los activos consignados en la rúbrica "Valores mobiliarios" carecen de valor de realización, lo que hace necesaria la toma de decisiones al respecto por parte del ISM.

Por otra parte se ha observado, por lo que se refiere al 5% restante del saldo de esta cuenta, que en el inventario justificativo de la misma, figuran como adquisiciones del ejercicio 1990, valores que ya integraban el saldo del ejercicio 1989.

Cuentas diversas

En este subgrupo y en la rúbrica "Otras entidades c/c" figuran en este ejercicio todas las divisionarias de signo deudor relativas a las operaciones procedentes de la Organización de Trabajos Portuarios por un saldo de 4.624 millones de pesetas. En el mismo concepto del pasivo figuran 4.499 millones de la misma naturaleza. Esta situación que procede del ejercicio 1980 sigue pendiente de resolución por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto de la liquidación definitiva de dicho Organismo, que se extinguió com tal, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el Servicio Público de Estiba y Desestiba de Buques..

La cuenta "Partidas pendientes de aplicación", que también figura en este subgrupo con un saldo de 149 millones de pesetas y que se regularizó por diferencias en 1.1.1987, esta integrada básicamente por partidas que proceden de los ejercicios 1988 y 1989 sin aplicación definitiva. Además se ha observado la falta de criterios homogéneos de imputación de operaciones de la misma naturaleza que figuran en esta cuenta o en la de "Deudores diversos", tal es el caso de "pagos delegados pendientes de abono". En esta misma cuenta figuran en el pasivo 47 millones a los que son de aplicación las observaciones que anteceden.

Por lo que se refiere a "Operaciones en curso", con un saldo de 130 millones de pesetas, es de aplicación lo manifestado al tratar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social esta misma rúbrica, por cuanto el saldo representativo de los pagos justificados del "Fondo de maniobra" pendientes de reposición por la Tesorería General de la Seguridad Social (128 millones) no hay constancia de que se refiera a remesas de efectivo en curso.

No se acepta la alegación. El Plan de cuentas de aplicación en el ejercicio 1990 establece que la cuenta "Operaciones en curso" recogerá transferencias de efectivo en curso de realización. El I.S.M. formaliza en esta cuenta además gastos justificados cuya reposición esta pendiente de ordenación por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Pasivo

Reservas

En este subgrupo figura la cuenta "Fondo de estabilización" con un saldo de 13.495 millones de pesetas, cifra que supone un incremento neto de 1.855 millones respecto del ejercicio anterior. El funcionamiento que viene teniendo este Fondo, al que se aplican fundamentalmente operaciones de capital y el resultado de regularizaciones contables, pone de manifiesto una falta de homogeneidad en su tratamiento, dado que en ningún caso se refiere al resultado de la gestión que tiene atribuida la Entidad, ni siquiera al que se deriva de la totalidad de las referidas operaciones de capital. Por otra parte, hay que señalar que no se cumple lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 36/1978 de 14 de noviembre, según la cual se constituirá un Fondo de estabilización único para todo el Sistema en la Tesorería General de la Seguridad Social, y ello sin perjuicio de la discordancia que supone la particular regulación de esta Entidad en relación con los principios de unidad gestora, unidad patrimonial, solidaridad financiera, caja única y racionalidad y eficacia administrativa que inspiraron la reforma institucional de 1978.

No se aceptan las alegaciones. Es precisamente la colisión de normas la que se denuncia en las observaciones que anteceden.

Préstamos recibidos externos

En este subgrupo figura solamente con saldo la cuenta "Préstamos recibidos" por importe de 737 millones de pesetas, que es representativa de los créditos recibidos para la financiación de la de "Préstamos sociales" que figuran en el activo.

Dada la interrelación de ambas cuentas, la revisión pendiente de realizar por la Entidad en relación con los préstamos sociales incide directamente en el seguimiento y control de los préstamos recibidos.

Con independencia de ello y de la información recibida hasta la fecha, se deduce que en diversos préstamos no se formalizan amortizaciones, en otros, que de acuerdo con los cuadros de amortización debieran estar totalmente amortizados, permanecen saldos. Asimismo, no se dispone de los cuadros de amortización en algún préstamo, o estos no contienen información suficiente que permita verificar las amortizaciones practicadas.

Las actuaciones practicadas en aplicación de la Resolución de la Comisión Mixta, en relación con la cuenta de "Préstamos sociales", incluyen asimismo el ajuste y regularización de préstamos recibidos externos, lo que supone el cumplimiento de los objetivos de la Resolución por lo que a esta rúbrica se refiere.

Acreedores

Este subgrupo, con un saldo de 3.190 millones de pesetas, está integrado por las cuentas: "Acreedores diversos", con un saldo de 74,5 millones, "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" con 1.162 millones, "Acreedores por prestaciones" con 43 millones, "Obligaciones contraídas" con 1.594 y "Residuos de presupuestos cerrados" 316 millones.

Las anomalías más destacables se producen en "Acreedores diversos" e "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" y se refieren a falta de identificación de los acreedores, apuntes de signo contrario a la naturaleza de la cuenta sin la debida explicación, y a la inclusión como acreedores de conceptos indebidos, como es el caso de las retenciones a adjudicatarios de obras y servicios en concepto de garantía de los mismos. En "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" figuran a su vez apuntes deudores y acreedores sin especificar, partidas con fechas anteriores a las legales para liquidar las correspondientes retenciones y conceptos indeterminados en los inventarios recibidos.

II.2.2.5.- Tesorería General de la Seguridad Social

Activo

Inmovilizado material

En este subgrupo de cuentas figuran con saldo: "Inmuebles" con un valor bruto de 286.019 millones de pesetas y una amortización acumulada de 33.663 millones, "Terrenos y solares" con 4.280 millones, "Instalaciones" con un valor bruto de 611 millones y amortización acumulada por 64 millones, "Mobiliario y material no móvil" con 29.049 millones de valor bruto y amortización acumulada por 2.455 millones y "Material móvil" con 51 y 25 millones, respectivamente.

Respecto de "Inmuebles" y "Terrenos y solares" no se dispone como en ejercicios anteriores de los inventarios representativos de los bienes integrantes de estas cuentas, que reflejen la totalidad de aquellos en uso por las Entidades Gestoras y este Servicio Común.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.a de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido inventario de inmuebles con una información más completa que la de ejercicios anteriores, tanto en materia de inversiones como de amortizaciones. De la comparación del saldo contable con el importe del inventario resulta una desconciliación de 33 millones de pesetas, cifra que no es significativa, puesto que es el neto de diferencias de uno y otro signo que están localizadas y cuantificativas por la Seguridad Social y que se deben a modificaciones patrimoniales no formalizadas contablemente, así como a la permanencia en contabilidad de inversiones realizadas por las Comunidades Autónomas con servicios transferidos. Estas diferencias entre el inventario y los saldos contables serán regularizadas en los ejercicios 1991 y 1992, según la información recibida.

Del análisis del inventario se desprenden las deficiencias ya señaladas en el Informe precedente: inmuebles que no son propiedad de la Seguridad Social (arrendados, cesiones de uso, del patrimonio del Estado, importes en concepto de "cancelaciones", etc.), otros inmuebles a los que no se han incorporado los terrenos y algunos con valor neto negativo.

Por lo que se refiere a la amortización de estos bienes, el saldo contable acumulado a 31.12.1990 supera en 7.030,5 millones de pesetas el valor que resulta del inventario. Esta diferencia se debe fundamentalmente a las dotaciones correspondientes a inmuebles de Comunidades Autónomas con servicios transferidos, no recogidas en inventario. Respecto a la conciliación de estos datos no se ha recibido información complementaria, si bien se estima que su regularización debe efectuarse en paralelo a la de los inmuebles correspondientes.

Asimismo, a tenor de lo establecido en el apartado I.a de la Resolución citada, se ha recibido inventario de terrenos y solares del que resulta un valor total de 3.698 millones de pesetas, cifra inferior en 582 millones al saldo contable. Esta diferencia se debe fundamentalmente a bajas en el inventario de esta rúbrica e incorporaciones en la de inmuebles sin el correspondiente reflejo contable, diferencia que según la información complementaria recibida se subsanará en los ejercicios 1991 y 1992.

En "Instalaciones" siguen pendientes de acometerse las tareas conducentes a la obtención de inventarios físicos de los bienes que integran esta masa patrimonial donde figuren adecuadamente imputadas las correspondientes amortizaciones. A su vez, se señala la dificultad que existe para identificar los conceptos que deben imputarse a esta cuenta y su diferenciación de los correspondientes a "Mobiliario y material no móvil", para lo que sería necesario el desarrollo normativo pertinente. Por otra parte, el actual cuadro de subcuentas de esta rúbrica no resulta el más adecuado para el logro de tales fines, no siendo siquiera concordante con el correspondiente a las divisionarias de amortización acumulada. El fondo de amortización de instalaciones no ha experimentado dotación con cargo a los créditos presupuestarios correspondientes desde el ejercicio 1987 y los aplicados en dicho ejercicio se abonaron al fondo de amortización de mobiliario y material no móvil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.b de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido información complementaria en la que se detalla el movimiento contable de las provincias que presentan saldo, con excepción de Barcelona. En el análisis practicado se observa la inclusión de partidas que corresponden a "Mobiliario y material no móvil" y a otras rúbricas, además de la existencia de apuntes con conceptos indeterminados en los que se hace referencia a la falta de antecedentes para aclarar su composición. El fondo de amortización esta pendiente de distribución y, según la información recibida, ésta se pospone hasta que finalicen los trabajos en curso de realización para el saneamiento del contenido de la cuenta. Por cuanto antecede, se puede concluir que, si bien se ha producido un mayor volumen de información, ésta tan sólo constituye la realización de tareas preliminares para la obtención de los correspondientes inventarios físicos.

En "Mobiliario y material no móvil" se dan circunstancias similares a las manifestadas respecto a la cuenta de "Instalaciones", tanto por lo que se refiere a la falta de inventarios justificativos de los bienes integrantes de esta cuenta como a la adecuada imputación de amortizaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.b de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido inventario en el que se incluye resumen por centros agrupando los saldos por años de adquisición. Dicho inventario, que asciende a 29.723 millones de pesetas, supera el saldo contable en 674 millones (788 millones de mayor valor en Mobiliario y 114 de menor importe en equipos informáticos). Esta diferencia no esta localizada por la Seguridad Social y los fondos de amortización no figuran aplicados individualizadamente a los bienes, tareas que según la información recibida están en curso de realización. Por otra parte, en los inventarios se incluyen bienes en uso por otras Entidades de la Seguridad Social e incluso por Organismos ajenos a la misma (entre los que destaca el Instituto Nacional de Empleo con 2.310 millones), así como bienes (material informático) en los que consta como provincia de ubicación el almacén del proveedor y otros procedentes de ejercicios muy antiguos que figuran como en desuso, inactivos o almacenados, situaciones que no se justifican y que, previa verificación, deberían subsanarse mediante las bajas oportunas.

En "Material móvil" se vuelven a producir las carencias ya mencionadas en los anteriores conceptos y en Informes precedentes, relativas a la falta de inventarios que identifiquen los vehículos y a su adscripción por centros, así como los correspondientes desgloses de amortizaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.a de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido inventario de material móvil por valor de 34 millones de pesetas, lo que supone en relación con el saldo contable un menor importe de 17 millones, sin conciliar. Además de esta diferencia hay que destacar que no figuran las amortizaciones correspondientes y que en la mayoría de los vehículos no consta la matrícula, dato esencial para su identificación.

Inmovilizaciones en curso

Este subgrupo de cuentas esta constituido por "Inmuebles en construcción" con un saldo de 17.234 millones de pesetas, "Estudios y proyectos en curso" con 93 millones e "Instalaciones en montaje" con 274 millones.

En "Inmuebles en construcción" no existe información que identifique debidamente el saldo de cada obra en curso de ejecución. La información recibida se refiere a detalles de movimientos contables por provincias de los que se deduce la existencia de aplicaciones incorrectas y criterios dispares para operaciones similares en una misma provincia. Los Servicios Centrales, donde se concentra la mayor parte del saldo, no remiten información alguna. En esta cuenta permanece la divisionaria "Inmuebles en construcción de Comunidades Autónomas" con 6.091 millones de pesetas de saldo, que se refieren a tres Comunidades (Cataluña, País Vasco y Valencia) con servicios sanitarios transferidos y que, dadas las fechas de procedencia de las operaciones, requiere un análisis particularizado de la situación patrimonial y legal de los bienes que la integran para llevar a cabo la aplicación definitiva de estos activos. De otra parte y como ya se puso de manifiesto en el Informe del ejercicio 1989, el resto de las Comunidades Autónomas con servicios sanitarios transferidos y la totalidad en cuanto a los servicios sociales transferidos no han recibido igual tratamiento contable.

"Instalaciones en montaje" y "Estudios y proyectos en curso" permanecen en la misma situación que en el ejercicio anterior, tanto por el importe del saldo como por su justificación, que como ya se mencionó en el Informe del ejercicio 1989 no identifica adecuadamente la naturaleza de las operaciones que se formalizan. Se mantienen múltiples partidas de ejercicios muy antiguos sin incorporarse a la inversión definitiva, lo que supone una situación anómala dado el carácter transitorio de estas cuentas.

En cumplimiento del apartado I.a de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido detalle de inmuebles en construcción de Servicios Centrales, donde se concentra la mayor parte de dicho saldo. Las inversiones que figuran en el mismo, tanto nuevas como de reposición, corresponden fundamentalmente a inmuebles terminados, estando en consecuencia pendiente el traspaso a la cuenta de "Inmuebles", previa depuración de diversas partidas que figuran como gastos de reparación y por tanto no activables. Asimismo y por lo que se refiere a "Instalaciones en montaje" y "Estudios y proyectos en curso", se ha recibido nueva documentación justificativa de los saldos contables, en la que se confirma la permanencia en estas rúbricas de una gran parte de inversiones ya ejecutadas, así como la presencia de partidas no activables.

Fianzas y depósitos constituidos

Este subgrupo de cuentas esta integrado por "Fianzas constituidas" con un saldo de 178 millones de pesetas y "Depósitos constituidos" con 101 millones. Estos saldos no están justificados con los correspondientes inventarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.d de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido inventarios de fianzas y depósitos constituidos, según los cuales gran parte del saldo de ambas cuentas (el 52% de fianzas y el 32% de depósitos) se refieren a operaciones anteriores a 1980, de las que se indica carecer de antecedentes. Los importes que arrojan los inventarios en comparación con los valores contables suponen las siguientes diferencias pendientes de regularización: en fianzas el saldo a 31.12.1990 supera en 46 millones de pesetas al valor de inventario (un 35%) y en depósitos este último excede el saldo contable en 39 millones (un 38,6%). Estas diferencias, que están localizadas y cuantificadas por la Seguridad Social y que se deben fundamentalmente a la formalización de operaciones relativas a fianzas en la cuenta representativa de los depósitos, constituyen cifras provisionales de las regularizaciones a practicar, toda vez que, según la información recibida, no se ha concluido el análisis de las operaciones que afectan a ambas rúbricas, y está en trámite de confirmación por los receptores o depositarios la vigencia e importes de las partidas inventariadas.

Préstamos concedidos a largo plazo

Este subgrupo lo constituyen las cuentas "Préstamos sociales" con un saldo de 1.911 millones de pesetas, "Deudores por créditos laborales" con 975 millones y "Otras inversiones sociales " con 148 millones.

El saldo de la cuenta "Préstamos sociales" permanece invariable respecto al ejercicio anterior. No existe información que permita identificar los préstamos ni los prestatarios a que la misma se refiere. Permanecen partidas procedentes del ejercicio 1980 y anteriores por importes elevados sin variación y ábonos, también de importes considerables, que no se puede apreciar que correspondan a amortizaciones. En resumen, esta cuenta requiere de un análisis pormenorizado que clarifique su contenido y justifique debidamente el saldo.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado I.c de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido dos informes de la Intervención General de la Seguridad Social. El recibido durante el trámite de alegaciones aporta relación inventariada de prestatarios por importe de 752 millones que anteriormente figuraban integrados en "Préstamos al personal" cuya condición de realizable está pendiente de verificar. Se plantea llevar a cabo el ajuste del saldo contable al referido valor, con contrapartida en "Deudores diversos" y "Préstamos al personal".

En "Deudores por créditos laborales" se sigue careciendo de inventarios y la distribución de saldos entre las Direcciones Provinciales y los Servicios Centrales (generalmente acreedores en aquéllas y deudores en éstos) demuestra una falta de seguimiento adecuado de este tipo de operaciones. Estas circunstancias ya fueron puestas de manifiesto en Informes precedentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.c de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido informe de la Intervención General de la Seguridad Social sobre la cuenta que antecede donde se ponen de manifiesto los múltiples factores que concurren en la situación actual de falta de representatividad de la cuenta, y en el que se establece la sistemática de trabajo a seguir para determinar la relación nominal de deudores con créditos exigibles. A tal fin se han utilizado como base de documentación los registros mecanizados de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, de cuyo análisis se ha obtenido el procedimiento de cuantificación de la deuda viva. La consecución de resultados concretos y las regularizaciones pertinentes se preven para el ejercicio 1992.

En la cuenta "Otras inversiones sociales", en la que el saldo permanece prácticamente invariable desde 1979, se dan similares circunstancias a las expuestas en las demás cuentas de este subgrupo, no existiendo inventario justificativo de los beneficiarios de las ayudas otorgadas ni información relativa a las amortizaciones practicadas, por lo que, al igual que en las cuentas precedentes, también es preciso un análisis que clarifique su contenido real.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.c de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido información complementaria sobre esta cuenta en la que se detallan los saldos por provincias y por Entidades ya extinguidas concesionarias de los préstamos, información en la que no se aporta relación de prestatarios, si bien según la misma se han solicitado aclaraciones al respecto al INSERSO, Organismo que gestiona en la actualidad este tipo de inversiones.

Aprovisionamientos y suministros

Al igual que se ha señalado en otras Entidades (INSS e ISM), la Tesorería General de la Seguridad Social tampoco formaliza operaciones en este subgrupo de cuentas, a pesar de que en su gestión se producen adquisiciones y consumos de bienes almacenables, lo que da lugar a la falta del adecuado reflejo contable de este área económica.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que anteceden. El Plan de Cuentas que se aplica en el ejercicio 1990 (R.D. 3261/1976, de 31 de diciembre) contempla la formalización de todas las Existencias sin exclusión de las de carácter administrativo. También la nueva normativa contable (SICOSS), de aplicación a partir de 1.1.1993, establece igual criterio.

No es el principio de importancia relativa que se cita en alegaciones el determinante de la formalización como existencias de los bienes almacenables, sino el hecho de que estos bienes, al margen de su valor, procedan de gastos administrativos o asistenciales.

Respecto al criterio de economicidad, también aludido en alegaciones, no resultaría lesionado por las formalizaciones contables de existencias puesto que se manifiesta tener establecidos controles extracontables de almacenes.

Deudores

En este subgrupo de cuentas sólo figura con saldo la cuenta "Deudores diversos" por importe de 77.921 millones de pesetas, que supone un incremento del 16% en relación con el ejercicio anterior, como consecuencia de la incorporación de la subcuenta "Inserso. Insuficiencias Ley 13/82 LISMI". La mayor parte de dicha cifra se concentra en los Servicios Centrales (57%) y en la Dirección Provincial de Barcelona (22%), aunque todas las Direcciones Provinciales presentan saldo.

Se siguen produciendo las anomalías ya denunciadas reiteradamente en Informes precedentes, que se refieren básicamente a:

- Existencia de numerosos desgloses en divisionarias de diverso grado de desarrollo que no se adecúan a la naturaleza de las operaciones propias de la cuenta.
- Carencia de representatividad de numerosos saldos como consecuencia de la existencia de partidas deudoras y acreedoras que, en algún caso, llega a producir saldos de signo contrario al de la naturaleza de la cuenta.
- Existencia de partidas de ejercicios atrasados, que evidencian una falta de seguimiento de las operaciones registradas.

Lo anterior conduce, en resumen, a una falta de relaciones nominales de deudores realizables para la Seguridad Social y, en consecuencia, a un desconocimiento de la situación real de esta masa patrimonial. De la distribución del saldo en divisionarias merece destacarse:

La subcuenta "Inserso, Insuficiencia Ley 13/1982 LISMI", que refleja un saldo de 18.582 millones de pesetas, figura por vez primera en el presente ejercicio para formalizar los pagos realizados por la Seguridad Social en concepto de prestaciones LISMI sin la adecuada financiación por el Estado. No se justifica la contabilización de la deuda en el Balance de esta Entidad, habida cuenta que la gestión de estas prestaciones corresponde al Instituto Nacional de Servicios Sociales.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que anteceden. Se modifica el texto del Anteproyecto suprimiendo la referencia a la falta de detalle de partidas integrantes del saldo, teniendo en cuenta la información complementaria aportada por la Tesorería General y no como consecuencia de las alegaciones. Respecto a la contabilización de la deuda en la Entidad Gestora, no se aceptan las alegaciones formuladas. La competencia que sobre los ingresos del Sistema tiene adjudicada la Tesorería General no impide que la deuda se contabilice donde se gestionan las operaciones que han dado lugar a la misma.

La subcuenta "Operaciones con Entidades Gestoras a documentar", con un saldo de 23.856 millones de pesetas, presenta en el concepto "Operaciones pendientes de documentar de ejercicios anteriores" la práctica totalidad del saldo (el 99,7%), localizado a su vez fundamentalmente en la Dirección Provincial de Barcelona y por operaciones de relación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De similares características pero referida a operaciones del propio Servicio Común es la subcuenta "Operaciones en trámite de documentar" con un saldo de 6.474 millones, que, como la anterior, carece del correspondiente inventario de partidas, deduciéndose de la documentación aportada una composición heterogénea del saldo. Dado el carácter transitorio de estas cuentas y la antigüedad de los saldos, se deduce una falta de seguimiento y control de las operaciones formalizadas en las mismas.

"Recaudación estimada Mutuas". Esta divisionaria, con un saldo de 5.666 millones de pesetas, sigue presentando las mismas irregularidades denunciadas en Informes anteriores respecto a la existencia de subsaldos y partidas de uno y otro signo con varios años de antigüedad, contenido heterogéneo y pendientes de aplicación finalista. Se compone de cuatro subdivisionarias de las cuales dos presentan saldo deudor por un total de 1.028.921 millones y dos acreedoras que suman 1.023.255 millones. Entre ellas destaca la denominada "Varios" con un saldo acreedor de 892.814 millones compuesto de un saldo de origen 31.12.1981 y numerosos apuntes de uno u otro signo desde 1982, con conceptos que no identifican la naturaleza de las operaciones, con partidas imputadas a Mutuas denominadas "inexistentes", anotaciones varias de rectificación de recaudación etc., todo lo cual evidencia una falta de representatividad económica de esta rúbrica, sin actuaciones por parte de los órganos responsables conducentes a su saneamiento y regularización.

La subcuenta "Saldos varios a 31.12.1980", que asciende a 5.915 millones de pesetas, cuyo título ya pone de manifiesto la situación singular de su contenido.

"Operaciones varias", con un saldo a 31.12.1990 de 9.661 millones de pesetas, del cual 9.610 millones corresponden a la subdivisionaria "Cotización estatal OM 8.9.1981", que a su vez es el resultado neto de operaciones de uno y otro signo. También permanecen con saldo subdivisionarias con denominaciones tales como: "Intereses deudores c/c" con 117 millones de saldo, que además se ha incrementado en 5 millones respecto de 1989, "Pago plusvalía INSS", "Gastos valores" "Gastos anuncios a prorratear", "Diferencias en conciliación saldos" y "Operaciones varias", todas ellas indicativas de aplicaciones o actuaciones incorrectas.

"Deudores traspasados Comunidades Autónomas" presenta un saldo de 6.068 millones de pesetas, relativo a saldos residuales de las provincias afectadas por las transferencias del INSALUD e INSERSO a Comunidades Autónomas. Se observa, como en el Informe del ejercicio 1989, la falta de actuaciones conducentes a la realización de estos derechos o a su baja en contabilidad. De otra parte, hay que señalar que en esta rúbrica no figuran la totalidad de los saldos residuales de signo deudor de las distintas Comunidades Autónomas, parte de los cuales están incluidos en los saldos de las cuentas corrientes que se siguen a las mismas por esta Entidad.

"Pagos anticipados" y "Rentas e intereses a cobrar no vencidos", con un saldo de 318 y 36 millones de pesetas, respectivamente, aparecen como divisionarias de "Deudores diversos" por primera vez en este ejercicio, habiendo figurado en los balances precedentes en los subgrupos de ajustes por periodificación propios de estas rúbricas. Estos cambios de ubicación de cuentas, como se ha denunciado en Informes anteriores, no suponen una subsanación de los defectos del contenido de las mismas, permaneciendo la situación irregular reiteradamente denunciada de operaciones de los ejercicios 1980 y 1982.

En resumen, la cuenta "Deudores diversos" precisa un urgente análisis que clarifique el contenido de las múltiples divisionarias en que se subdivide, que se adecúe su estructura a las necesidades reales que la formalización contable de estas operaciones requiere y que se determinen las partidas que actualmente deben integrar los saldos para obtener relaciones nominales de deudores que sean fiel reflejo de la realidad económica de esta masa patrimonial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido dos informes sobre "Deudores". El formulado en primer término plantea de forma conjunta, dada su interrelación, el análisis de dicha rúbrica y las de "Acreedores" y "Partidas pendientes de aplicación", con objeto de clarificar su contenido y determinar los derechos y obligaciones realizables y exigibles para la Seguridad Social. En el segundo informe (recibido durante el trámite de alegaciones del Informe Anual) se da cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo o están en curso de realización respecto del subgrupo "Deudores", a fin de adecuar su saldo a la situación real.

La información recibida, que pone de manifiesto el desarrollo de una labor de esclarecimiento que afecta a 59.549 millones de pesetas (el 76% del saldo de "Deudores"), se concreta en la formulación de propuestas de regularización por 36.877 millones, en el enunciado de operaciones en ejercicios posteriores que también regularizan diversas partidas y en la confección de detalles de los importes residuales de las divisionarias afectadas por la indicada regularización. Los 18.372 millones restantes del saldo de deudores (el 24%), figuran pendientes de las actuaciones necesarias para completar el análisis de este subgrupo.
De otra parte, hay que señalar también que el conjunto de derechos de la Seguridad Social frente a terceros de mayor importancia económica, entre los que sobresale "Deudores por recaudación" figura en este ejercicio con un saldo de 712.913 millones de pesetas en cuentas de orden de carácter meramente informativo.

Ajustes por periodificación

En este subgrupo figura solamente la cuenta "Cobros diferidos" con un saldo de 64.804 millones de pesetas, de los cuales 57.902 millones corresponden a transferencias del presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, pendientes de cobro por ésta a 31.12.1990. El resto del saldo, 6.902 millones, se compone de partidas heterogéneas de uno y otro signo que proceden de los ejercicios 1988 y anteriores y que, como repetidamente se viene indicando, deben ser objeto de revisión.

Tesorería

Este subgrupo de cuentas presenta un saldo de 484.451 millones de pesetas constituido en su totalidad por la cuenta "Bancos y Cajas de Ahorro cuentas vista". El 91,1% de este saldo corresponde a los Servicios Centrales. En la documentación justificativa se han observado algunos defectos que se refieren a aspectos formales, tales como fechas, firmas, y falta de conciliación entre algunos saldos contables y bancarios. Hay que destacar, como en Informes precedentes, que siguen figurando en esta cuenta 574 millones de pesetas de saldos bancarios en trámite de depuración.

Es de aplicación lo manifestado en el INSS en cuanto a la falta de uniformidad en el tratamiento contable de las operaciones del Fondo por las distintas Entidades. El SICOSS a partir del ejercicio 1993 prevé unificar estos criterios.

Deudores por operaciones financieras

En este subgrupo figuran las cuentas "Valores mobiliarios amortizados" con un saldo de 189 millones de pesetas y "Rentas e intereses a cobrar" con 514 millones. La información recibida no permite conocer las operaciones aplicadas a estas rúbricas en las que la permanencia de saldos no es concordante con la transitoriedad inherente a estos derechos pendientes de cobro. En el caso de "Rentas e intereses a cobrar", siguen incorporándose nuevas partidas que en el ejercicio 1990 han supuesto un incremento en el saldo de 128 millones (el 33%), entre las que sigue figurando una acreedora por importe de 192 millones procedente de 1981 sin información sobre su naturaleza.

Inversiones financieras

En este subgrupo figuran las cuentas "Valores mobiliarios" con un saldo de 1.930 millones de pesetas, "Préstamos al personal" con 10.172 millones e "Imposiciones a plazo fijo" con 10 millones.

De "Valores mobiliarios" se ha recibido balance de la cartera elaborado por la Subdirección General de Patrimonio, cuyo valor de coste no coincide con el saldo de ninguna de las dos subcuentas que la integran, no obstante su denominación: "Valores mobiliarios según patrimonio" y "Diferencias con patrimonio a regularizar". La diferencia total con el saldo asciende a 882 millones. En los subgrupos "Acreedores diversos" y "Cuentas diversas" figuran operaciones relativas a la cartera de valores que, con la cuenta "Valores mobiliarios amortizados", requieren un análisis conjunto para esclarecer la situación contable de "Valores mobiliarios" y conseguir que las inversiones financieras de la Seguridad Social estén adecuadamente representadas en el balance de situación. Por otra parte, en el grupo "Cuentas de orden" figuran 15.518 millones de pesetas en la subcuenta "Valores mobiliarios depositados" que, a su vez, se subdivide en "Según patrimonio" con 1.165 millones de saldo y "Diferencias con patrimonio a regularizar" con 14.353 millones, que permanecen invariables en los últimos ejercicios. Según las normas de contabilidad aplicadas (Real Decreto 3261/1976 de 31 de diciembre) deberían representar los valores nominales de la cartera depositados en Entidades financieras, por lo que también procede tener en cuenta estas rúbricas en el análisis y regularización a que se ha hecho referencia en la cuenta anterior.

En la cuenta "Préstamos al personal" el saldo se distribuye en tres subcuentas con las denominaciones siguientes: "Préstamos y anticipos a corto plazo" con un saldo de 1.856 millones de pesetas, de signo acreedor, "Préstamos y anticipos a medio y largo plazo" con 1.441 millones y "Saldo ejercicios anteriores" con 10.587 millones. Se ha recibido inventario elaborado por la Subdirección General de Patrimonio de esta Entidad relativo a préstamos hipotecarios al personal por un valor de 3.062 millones de pesetas que no es posible comparar con los datos contables citados. Del análisis efectuado se desprende la existencia de préstamos en los que no se han registrado amortizaciones, otros de concesión muy antigua que reflejan pequeños importes residuales, varios en los que el saldo es acreedor, y por último, algunos beneficiarios como titulares de más de un préstamo. En esta rúbrica las actuaciones deben dirigirse fundamentalmente a esclarecer la composición del saldo contable, para adecuar la estructura de la misma a la naturaleza de las operaciones que se le imputan. De otra parte, por lo que se refiere a anticipos al personal, y como reiteradamente se ha venido señalando en Informes anteriores, el procedimiento contable que se sigue, disocia la gestión de los hechos económicos de su formalización contable y además, en el caso de los gastos por concesiones, implica la contabilización presupuestaria y financiera en Entidades distintas, todo lo cual dificulta el adecuado seguimiento y control de estos activos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.c de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido informe de la Seguridad Social al que se ha hecho referencia al analizar la cuenta de "Préstamos sociales" y nuevo inventario de Préstamos hipotecarios a 31.12.1990 elaborado por la Subdirección General de patrimonio que asciende a 3.101 millones. En dicho informe se cuantifica el saldo contable de préstamos al personal en 4.323 millones, que se obtiene por la agregación de saldos, subsaldos y partidas de diferentes cuentas deudoras y acreedoras donde se han detectado operaciones relativas a tal concepto. El informe relativo a Préstamos Sociales recibido durante el trámite de alegaciones y que se menciona en la rúbrica correspondiente, modifica los datos antedichos que, por otra parte y como se plantea en el informe elaborado por la Seguridad Social son provisionales toda vez que de los análisis en curso en otras rúbricas pueden surgir nuevas operaciones a tener en cuenta. Tal es el caso de los préstamos concedidos por la extinguida Mutualidad de la Previsión que están pendientes de un tratamiento contable que integre el principal de la deuda y los reintegros correspondientes.

Por lo que se refiere a anticipos al personal se ha recibido inventario parcial relativo al personal funcionario de las distintas Entidades y al laboral del Instituto Social de la Marina que asciende a 916 millones. El saldo contable, se cuantifica en 3.818 millones también procedente de diversas cuentas donde se han podido detectar operaciones de esta naturaleza. Estos datos tienen un grado de provisionalidad superior al de préstamos, que no ha permitido la conciliación entre saldos e inventarios.

En términos generales las actuaciones practicadas hasta la fecha y sin perjuicio de las observaciones que anteceden representan un progreso significativo en la documentación de esta masa patrimonial respecto de ejercicios anteriores.

En la cuenta "Imposiciones a plazo fijo" el saldo procede de imposiciones de ejercicios anteriores a 1981 y permanece inamovible desde 1986, no habiéndose recibido certificación bancaria acreditativa del mismo.

Cuentas diversas

Este subgrupo de cuentas figura con un saldo global de 197.577 millones de pesetas en el que se integran el correspondiente a "Entidades del Sistema de la Seguridad Social c/c" por importe de 124.785 millones, "Entes Autonómicos c/c" con un valor de 11.241 millones, "Otros Entes" con 27.534 millones y "Partidas pendientes de aplicación" con 34.017 millones.

El saldo de "Entes Autonómicos c/c" está integrado por subcuentas de distintas Comunidades Autónomas con servicios y funciones transferidos, tanto del INSALUD como del INSERSO, correspondiendo al Servicio Andaluz de Salud un 99% (11.138 millones). Dadas las operaciones que el mismo comprende en relación con las relativas a otros Entes Autonómicos, no se ha seguido un proceso contable uniforme en la formalización del traspaso a aquel de bienes, derechos y obligaciones, ya que en otras Comunidades se han formalizado en las cuentas de "Deudores diversos" y "Acreedores diversos", por lo que deberá ser objeto de revisión para lograr un tratamiento uniforme.

Con independencia de lo anterior, la información recibida procede de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que conste conformidad alguna de las Comunidades Autónomas afectadas, lo que supone una justificación insuficiente. De otra parte, los saldos recogen partidas muy antiguas pendientes de realización, lo que no es coherente con la naturaleza transitoria de las operaciones de crédito o débito que se produzcan con las mismas, ya que tales saldos deberían ser cero o el resultante de los últimos derechos y obligaciones pendientes de ejecución.

De signo acreedor y en el pasivo del balance figuran también cuentas corrientes con Comunidades Autónomas con servicios transferidos por importe de 1.455 millones de pesetas, a las que son de aplicación las observaciones precedentes. La falta de uniformidad aludida anteriormente es extensiva en este caso a la Comunidad Autónoma de Cataluña, por cuanto presenta una sola cuenta de relación para las operaciones del INSALUD e INSERSO, cuando en las demás figuran en cuentas diferenciadas.

La cuenta "Otros Entes" presenta un saldo global de 27.534 millones de pesetas distribuido en las divisionarias: "Fondo de Solidaridad c/c (F.N.P.T.)" con un importe de 12.050 millones, "Laboratorios farmacéuticos" con 1.231 millones y "Síndrome Tóxico c/c" con 14.253 millones. No se ha recibido extracto justificativo del saldo del "Fondo de Solidaridad c/c (F.N.P.T.)", y los que se han aportado sobre "Laboratorios farmacéuticos c/c" y "Síndrome Tóxico c/c" no aclaran suficientemente el concepto de los derechos y obligaciones que comprenden.

La primera de las subcuentas mantiene prácticamente el saldo del ejercicio anterior y corresponde a la Sede Central.

En la divisionaria "Laboratorios farmacéuticos" se ha reducido notablemente su saldo en relación con el del año 1989 (un 49%), si bien hay que señalar que permanece incluido en el mismo el importe de 593 millones de pesetas de la subdivisionaria denominada "Saldo a 31.12.1981. Errores de codificación", que debe ser objeto de un análisis particular para su aclaración y, en su caso, regularización. Asimismo, siguen figurando muchas partidas residuales de ejercicios antiguos en numerosos laboratorios, algunos de los cuales registran saldos acreedores (hasta un total de 125 millones), situación esta última contraria al significado de esta divisionaria que, según la información recibida, recoge la deuda pendiente en concepto de descuentos, general y complementario, de la industria farmacéutica.

El saldo de la subcuenta de relación con la Oficina de Coordinación del Síndrome Tóxico representa también una situación neta y la información recibida se reduce a un resumen de movimientos del ejercicio 1.990 que no permite conocer la naturaleza de las operaciones que comprende.

"Partidas pendientes de aplicación" tiene un saldo a 31.12.1990 de 34.017 millones de pesetas distribuido en dos subcuentas denominadas: "Otras cuentas" con 20.451 millones de saldo y "Diferencias de conciliación entre Entidades" con 13.566 millones.

La subcuenta "Otras cuentas" está desglosada en trece subdivisionarias (que, a su vez, se subdividen en otras) de contenido heterogéneo, en las que se integran operaciones de signo deudor y acreedor bajo conceptos que en numerosos casos no permiten identificar la naturaleza de aquéllas. De otra parte, el origen de diversos apuntes se remonta a 1981, lo que contraviene claramente su carácter transitorio. De las trece subdivisionarias mencionadas, seis, con denominaciones tales como: "Conciliación cuentas presupuestaria con financiera", "Diferencias de conciliación recaudación domiciliada", "De la cuenta 431", "Operaciones de otras Entidades gestoras pendientes", permanecen con saldo invariable durante varios ejercicios. Del resto, destaca por su saldo la denominada "Saldo disponible ejercicio anterior" con 10.329 millones de pesetas, que es el neto de operaciones deudoras por importe de 50.227 millones y acreedoras por 39.898 y donde figuran apuntes con conceptos del tipo de "Saldo 570.700 al 3.12.1981" con 20.015 millones y "A.P. subvenciones 79" con 36.415 millones. Igualmente, es de reseñar el saldo de la titulada "De origen deudor" con un importe neto de 5.484 millones distribuidos entre las distintas Direcciones Provinciales. También merece especial mención la subdivisionaria "Operaciones varias" residual de otra que tiene ya tal carácter, con un saldo de 1.410 millones que no es en absoluto representativo, dada su composición y desarrollo. En esta subcuenta se integran asimismo las subdivisionarias denominadas "Deudas ejercicio corriente" con un saldo acreedor de 499 millones, "Acreedores del ejercicio corriente" con un saldo deudor de 2.193 millones, "De ejercicios anteriores" con 2.956 millones de signo deudor y "Traspaso saldo de Servicios Centrales" con 3.240 millones de signo acreedor. En términos similares están el resto de subcuentas de diverso grado de desarrollo de esta rúbrica.

En el pasivo y también en las mismas circunstancias figuran a su vez 98.760 millones de pesetas de saldo en la subcuenta "Partidas pendientes de aplicación. Otras cuentas", saldo que también figura distribuido en trece subdivisionarias, de las que merece destacarse la denominada "De origen acreedor" con un saldo de 47.599 millones, donde abundan las partidas y subsaldos de signo deudor con varios años de antigüedad. El resto de las subdivisionarias repiten en mayor o menor medida los defectos reiteradamente puestos de manifiesto.

La subcuenta "Diferencias de conciliación entre Entidades de la Seguridad Social" permanece prácticamente con los mismos importes del ejercicio anterior, con excepción de la Dirección Provincial de Madrid, y la composición de los saldos presenta importes de uno y otro signo, por lo cual las cifras que figuran en balance carecen de significado. La Dirección Provincial de Madrid ha reducido considerablemente sus saldos y variado la presentación de los mismos, subclasificándolos por ejercicios origen de las diferencias. En el pasivo y en esta misma subcuenta figura un saldo de 13.350 millones, que presenta iguales características.

En resumen, en la rúbrica "Partidas pendientes de aplicación" se observa, de una parte, la carencia de una estructura de divisionarias adecuada que contemple las posibles operaciones imputables aplicando criterios restrictivos, dado su carácter transitorio, y, de otra, la falta de rigor y uniformidad en las aplicaciones contables que se realizan, así como la inexistencia de actuaciones conducentes a la aplicación definitiva de las operaciones en ellas formalizadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1.f de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido dos informes de la Intervención General de la Seguridad Social. En el primero, ya referido en el epígrafe de "Deudores", se señalan las líneas de actuación a seguir en el análisis de operaciones de la cuenta "Partidas pendientes de aplicación" para el esclarecimiento de su naturaleza y formalización contable definitiva en las rúbricas pertinentes, además de ofrecer una evolución de los saldos desde el ejercicio 1981. En el segundo informe (recibido durante el trámite de alegaciones) se aborda el análisis de la subcuenta "Otras cuentas", que figura, como ya se ha indicado, con un saldo neto en el activo de 20.451 millones de pesetas y en el pasivo de 98.760 millones, y se presentan los resultados del mismo, que se concretan en cruces internos de partidas deudoras y acreedoras de una misma divisionaria o entre varias divisionarias de la propia cuenta, en regularizaciones de importes parciales con otras cuentas (Deudores, Gastos, Operaciones en curso, etc.) y en la elaboración de detalles de partidas de los saldos residuales.

Los resultados de las actuaciones practicadas, por lo que a dicha subcuenta se refiere, no se consideran definitivos ya que pueden ser modificados por los trabajos en curso sobre la misma u otras relacionadas con ella. Los saldos pendientes de análisis o en trámite sin consecución de resultados se cifran en 11.033 millones de pesetas en la rúbrica que luce en el activo y en 68.455 millones por lo que afecta a la del pasivo.

Pasivo

Reservas

En este subgrupo figuran saldos en las cuentas "Fondo de estabilización" con un importe de 445.432 millones de pesetas y "Fondo de prevención y rehabilitación" con 44.245 millones.

Al Fondo de estabilización se han aplicado directamente, además del importe considerado como resultado del ejercicio, otras variaciones patrimoniales, consecuencia de los traspasos de funciones a las Comunidades Autónomas y de incorporaciones de Hospitales a la red del INSALUD que debieran tener tal carácter, así como 18.582 millones de pesetas en concepto de pagos de prestaciones de la Ley de Integración Social de Minusválidos (Ley 13/1982 de 7 de abril) sin financiación adecuada, como resultante de la formalización de la deuda del Estado con la Seguridad Social por las prestaciones pagadas por su cuenta, que a su vez constituye un resultado de gestión del ejercicio.

Por otra parte y como ya se ha mencionado al analizar esta rúbrica del Instituto Social de la Marina, no se cumple lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 36/1978 de 14 de noviembre, según la cual en la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un Fondo de estabilización único para todo el Sistema.

El Fondo de prevención y rehabilitación, que está constituido por el 80% de los excedentes de gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, una vez deducidas las dotaciones obligatorias a reservas de acuerdo con la normativa aplicable al respecto, tiene por objeto la financiación de planes de prevención y rehabilitación elaborados por las Mutuas y aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La dotación anual que deben efectuar las Mutuas se ingresa en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El saldo que figura en este Servicio Común está constituido por los excedentes pendientes de aplicación. Por otra parte, el saldo que presentan las Mutuas en su balance de situación, bajo esta misma rúbrica, está formado por las inversiones en inmovilizado efectuadas a los fines de prevención y rehabilitación y por los excedentes pendientes de ingresar en el Banco de España. Este desglose del saldo no constituye un procedimiento de formalización contable adecuado a la naturaleza de las operaciones que se realizan. El Fondo de prevención y rehabilitación, teniendo en cuenta su origen y destino, constituye una reserva de las Mutuas, sin perjuicio de su grado de disponibilidad, y por tanto debe figurar en su balance de situación.

Con independencia de lo anterior, la documentación justificativa del saldo que presenta la Tesorería General de la Seguridad Social no arroja información que permita conocer el importe del Fondo relativo a cada Mutua, ni las correspondientes dotaciones y aplicaciones realizadas por las mismas.

Préstamos recibidos externos

En este subgrupo presenta saldo: "Préstamos recibidos" con 132.697 millones de pesetas y "Acreedores hipotecarios" con 119 millones.

En "Préstamos recibidos" sigue siendo su componente principal el préstamo otorgado por el Estado mediante la Ley 3/1983 de 29 de junio por importe de 128.600 millones de pesetas, cuya amortización, prevista en el art. 5º de dicha Ley en tres años a partir de 1985, no se ha efectuado. No obstante, el art. 17 de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991 establece nueva forma de cancelación del citado préstamo.

Del resto del saldo (4.097 millones de pesetas), la mayor parte (3.198 millones) corresponde al INSS por operaciones sin movimiento desde, al menos, 1982 y sin información que permita conocer su naturaleza y composición. También figura en la cuenta un saldo pendiente de amortización por valor de 111 millones de pesetas de obligaciones emitidas por el extinguido Instituto Nacional de Previsión en el año 1952, saldo que en el inventario recibido asciende tan solo a 78 millones.

En la cuenta "Acreedores hipotecarios" se mantiene el mismo saldo de ejercicios anteriores, figurando como tales el INSS y el INSALUD, sobre todo este ultimo (116 millones). No se dispone de relación de acreedores, cuadros de amortización ni otros datos que permitan identificar suficientemente las operaciones formalizadas que proceden de, al menos, el ejercicio 1981.

Otros fondos

Solamente figura en este subgrupo la cuenta "Fondo de solidaridad" con un saldo de 2.554 millones. Este Fondo, que se creó por Ley 50/1984 de Presupuestos Generales del Estado para 1985 y cuyo funcionamiento se estableció por Real Decreto 180/1985 (13/2), no constituye una reserva del Sistema de la Seguridad Social, ya que la Tesorería General sólo tiene encomendada la gestión presupuestaria de ingresos y gastos por cuenta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al que corresponde la titularidad jurídica de los recursos del Fondo.

Acreedores

En este subgrupo, que presenta un saldo total de 173.901 millones de pesetas, figuran las cuentas que a continuación se detallan:

"Acreedores diversos". Esta cuenta, de la que no se dispone de inventarios que permitan conocer su composición, figura con un saldo de 43.852 millones de pesetas, que es el neto resultante de dieciséis divisionarias de contenido heterogéneo, entre las que destacan "Operaciones pendientes de aplicación" con 16.522 millones de saldo, distribuido a su vez en otras dieciseis subdivisionarias cuyas denominaciones ya denotan la incorrecta aplicación de operaciones, tal es el caso de "Retención préstamos hipotecarios", "Cobros préstamos pendientes de desglose", "Fondo de previsión complementaria aportación funcionarios", etc., que recogen operaciones de uno y otro signo de ejercicios con hasta diez años de antigüedad sin variación, y que, en cualquier caso, deben ser objeto de análisis y aplicación definitiva. No procede la inclusión en este subgrupo de cuentas tales como "AISS c/c", e "ILT a recuperar", que además tienen signo deudor. Por último, se incluyen saldos de carácter residual bajo títulos como "Otros fondos", "Otros saldos" y "Varios", con importes elevados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta, se recibió un primer informe de la Intervención General de la Seguridad Social que trataba conjuntamente el subgrupo de Acreedores con Deudores y Partidas pendientes de aplicación (ya aludido en los apartados correspondientes), en el que se planteaban las líneas de actuación a seguir y la evolución de los saldos desde el ejercicio 1981, a la vez que se facilitaban relaciones inventariadas de algunas subcuentas de Acreedores.

Respecto de este subgrupo, se ha recibido durante el tramite de alegaciones nuevo informe de la Intervención General de la Seguridad Social que complementa al anterior exponiendo los resultados obtenidos hasta la fecha. De los 43.852 millones de pesetas que integran el saldo del Balance a 31.12.1990 de "Acreedores diversos", se han sometido a análisis subcuentas con saldos por importe de 21.328 millones (el 47,3%). Como consecuencia de las actuaciones practicadas se exponen propuestas de regularizaciones (856 millones), cancelaciones por movimientos posteriores (12.915 millones), diferencias por falta de actuaciones en algunas provincias (5.319 millones) y relaciones inventariadas de partidas por importe de 2.238 millones.

Estos resultados pueden verse modificados por las actuaciones en curso sobre esta cuenta u otras relacionadas con ella.

"Acreedores traspasados Comunidades Autónomas". Con 11.536 millones de pesetas de saldo, que, como se ha dicho en la cuenta de activo "Deudores traspasados Comunidades Autónomas", no recoge la totalidad de saldos residuales de signo acreedor de las distintas Comunidades y las partidas formalizadas permanecen en general sin variación desde su incorporación a la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que demuestra la falta de actuaciones en orden a su cancelación.

"Recaudación líquida pendiente de tratamiento". Figura con un saldo de 7.422 millones de pesetas, que no es representativo de acreedores del Sistema de la Seguridad Social, por lo que no debería formar parte de este subgrupo de cuentas. Se desglosa a su vez en once divisionarias integradas por partidas con varios años de antigüedad.

"Diferencias en recaudación". Esta cuenta aparece con un saldo de 1.600 millones de pesetas, desglosado en "diferencias con Entidades financieras", "con Delegación Provincial ISM" y "con otras Entidades", saldo en el que figuran apuntes deudores y acreedores con origen hasta del ejercicio 1981.

"Mandamientos extrapresupuestarios a pagar". Presenta un saldo de 6.808 millones de pesetas, distribuido en nueve subdivisionarias de las que destacan los importes correspondientes al INSS con 3.266 millones, INSALUD con 1.815 millones y el de la propia Tesorería General que asciende a 958 millones. De las Direcciones Provinciales, al igual que en 1989, destacan por sus irregularidades Madrid y Barcelona con partidas deudoras y otras cuyas fechas de origen alcanzan hasta 1981.

"Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar". Registra un saldo de 15.482 millones de pesetas, correspondiendo a impuestos 15.215 y a cuotas de Seguridad Social 267. En cuanto a los primeros, destaca la subcuenta "Hacienda Pública IRPF" con 15.199 millones de saldo, de los cuales 14.064 corresponden a los Servicios Centrales y son el neto de 126.103 millones de signo deudor y 140.167 millones de signo acreedor, con partidas que proceden hasta de 1981 y conceptos tales como "Traspaso a la cuenta 420" por 2.544 millones, "Formalización escrito 1323 de 14.1.1985" por 45.444 millones, "De la cuenta 546" por 2.579 millones, etc., lo que denota una falta de claridad en la formalización y seguimiento contable de las operaciones. En la subcuenta "Cuotas de la Seguridad Social a pagar", con 267 millones de pesetas, se aprecian también deficiencias en los inventarios y carencia de los mismos en algunas Direcciones Provinciales. La mayor parte del saldo corresponde igualmente a los Servicios Centrales donde figuran partidas con fechas con origen hasta de 1982.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido respecto a esta cuenta los informes referidos en "Acreedores diversos". Según dicha información en "Impuestos y Cuotas de la Seguridad Social a pagar" se ha sometido a análisis la totalidad del saldo contable a 31.12.1990 (15.482 millones de pesetas) y se ha determinado como regularizable un importe de 14.062 millones, correspondiente en su mayor parte a los Servicios Centrales. Como diferencias en proceso de análisis de las que no se han obtenido resultados se cuantifican 49 millones.

"Obligaciones contraídas". Figura con un saldo de 5.511 millones de pesetas, adecuadamente documentado, del que corresponden a los Servicios Centrales 4.366 millones (el 79%).

"Libramientos presupuestarios pendientes de pago". Con un saldo de 102.442 millones de pesetas distribuido en once divisionarias representativas de los saldos correspondientes a cada una de las Entidades del Sistema de la Seguridad Social y a Organismos de Comunidades Autónomas con servicios transferidos. De la información disponible se deduce que un importante grupo de operaciones que superan los 9.000 millones corresponden a fechas anteriores a 31.12.1989, situación irregular teniendo en cuenta que estos acreedores se refieren a pagos ordenados pendientes de materializarse. Tampoco están debidamente identificados los conceptos que integran los saldos y en algunos casos figuran partidas de signo deudor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido respecto de esta cuenta, los informes referidos en "Acreedores diversos". Según dicha información, en "Libramientos presupuestarios pendientes de pago" se analiza la totalidad del saldo contable a 31.12.1990 (102.442 millones de pesetas), del que en el ejercicio 1991 se ha cancelado el 93,7% (96.014 millones), quedando pendiente de las actuaciones de cancelación o regularización correspondientes el resto del saldo (6.428 millones)

"Residuos de presupuestos cerrados". Presenta un saldo de 6.614 millones de pesetas, de los que 845 millones corresponden a ejercicios con más de cinco años de antigüedad y a conceptos de diversa naturaleza. Las operaciones propias de esta cuenta no tienen un adecuado seguimiento que permita identificar los acreedores de presupuestos cerrados que constituyen auténticas obligaciones para la Seguridad Social. Son de destacar las numerosas partidas (ayudas a empresas y entidades fundamentalmente procedentes de 1986) relativas al Fondo de solidaridad cuya permanencia no está justificada, así como la existencia de una subcuenta denominada "Traspasos saldos a 31.12.1979" con 165 millones de saldo. Por cuanto antecede, esta cuenta necesita un análisis y depuración para, en su caso, tramitar expedientes de baja en contabilidad de acuerdo con las normas vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta, se han recibido respecto a esta cuenta los informes referidos en "Acreedores diversos". Según dicha información, en "Residuos de presupuestos cerrados" se cancela en los ejercicios 1991 y 1992 el 90% del saldo (5.947 millones) mediante regularizaciones y cancelaciones de las que no se facilita información. Del 10% restante, según el detalle por ejercicios, corresponde el 73% al de 1986 (488 millones).

Acreedores por operaciones financieras

En este subgrupo figura solamente la cuenta "Préstamos recibidos" con 125.000 millones de pesetas de saldo, correspondiente a dos pólizas de crédito suscritas con el Banco de España para atender insuficiencias de tesorería. Los intereses satisfechos en el ejercicio 1990 y que según la información recibida ascienden, al menos, a 3.061 millones, no han tenido el reflejo presupuestario preceptivo, al haberse formalizado en "Partidas pendientes de aplicación", lo que constituye una actuación irregular, tanto por lo que respecta a la periodificación de gastos como a la gestión presupuestaria, ya que la suscripción de las referidas pólizas lleva consigo la necesidad de la oportuna cobertura crediticia para atender los correspondientes gastos por intereses.

Con independencia de lo anterior y al margen de otras consideraciones, es necesario resaltar que la Seguridad Social está soportando las citadas cargas financieras, que son consecuencia, no sólo de las dificultades de tesorería con origen en los pagos realizados por cuenta del Estado (Desempleo y LISMI), sino también de las que se derivan de los retrasos en la percepción de las subvenciones que figuran consignadas a su favor en los Presupuestos Generales del Estado.

Fianzas y depósitos recibidos

Este subgrupo de cuentas con un saldo de 1.133 millones de pesetas presenta una composición singular, puesto que se distribuye entre la cuenta de "Fianzas recibidas" con 722 millones de signo deudor, contrario a la naturaleza de la misma, y la cuenta "Depósitos

recibidos" con 1.855 millones de signo acreedor. No existen inventarios justificativos de las fianzas y depósitos recibidos donde conste la relación nominal de los titulares de estos pasivos, fechas origen y concepto correspondiente. Las citadas anomalías, que se vienen denunciando reiteradamente en Informes precedentes, necesitan de urgentes actuaciones que regularicen la situación contable de estos pasivos financieros, que no son en absoluto representativos de la realidad económica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado I.d de la Resolución de la Comisión Mixta, se ha recibido informe en el que se establecen los nuevos saldos de ambas rúbricas, después de redistribuir el montante global que figura en el balance teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones que comprende. Asimismo se aporta relación inventariada de fianzas y depósitos que presenta unas diferencias con los saldos contables establecidos de 1.439 y 21 millones de pesetas, respectivamente, sin localizar o detallar en la fase actual de desarrollo de los trabajos. En los inventarios recibidos se incluyen fianzas y depósitos con fecha origen posterior a 1.1.1987, fecha a partir de la cual deben figurar contablemente en las Entidades que exigieron su constitución, de acuerdo con la Resolución de 13.5.1987 de la Secretaría General para la Seguridad Social. Dado que en los balances de las Entidades también figuran saldos en estas rúbricas, se hace preciso un planteamiento conjunto y coordinado de todas las operaciones. Al mismo tiempo se hace necesaria la pertinente distribución por Organismos del saldo que figura en la Tesorería General de la Seguridad Social, todo ello en orden a la simplicidad y uniformidad del procedimiento contable.

Cuentas diversas

En este subgrupo, que figura con un saldo global de 257.256 millones de pesetas, se integran el correspondiente a "Entidades del Sistema de la Seguridad Social c/c" por importe de 17.206 millones, "Entes autonómicos" por 21.157 millones, "Otros Entes" con un valor de 93.926 millones, "Partidas pendientes de aplicación" con 112.110 millones y "Operaciones en curso" con 12.857 millones.

En la cuenta "Entidades del Sistema de la Seguridad Social c/c", hay que destacar la divisionaria que refleja la relación con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, con un saldo de 12.192 millones de pesetas, cifra que supone una diferencia de 92 millones con el importe que presenta el balance agregado de dichas Mutuas elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, si se eliminan cuatro Mutuas indebidamente incluidas en dicho balance la diferencia se reduce a 76 millones, que es la resultante de 162 millones de signo deudor y de 86 de signo acreedor. En desarrollos auxiliares figuran al menos veintiocho Mutuas con saldo en esta cuenta que han causado baja como consecuencia de absorciones o fusiones, y ello además del montante que por importe de 30 millones consta en dichos auxiliares en concepto de "Mutuas inexistentes".

La cuenta "Entes autonómicos c/c", tiene un saldo de 21.157 millones de pesetas, de los cuales 1.455 corresponden a cuentas corrientes con Comunidades Autónomas con servicios transferidos, que ya se han analizado en esta rúbrica del activo. El resto del saldo (19.702 millones) corresponde a "Entes autonómicos cuenta amortización inmovilizado traspasado", donde se han abonado las aplicaciones de los créditos que figuran en el capítulo 5º del presupuesto de las Entidades INSALUD e INSERSO, de los ejercicios 1988, 1989 y 1990, con destino a las Comunidades Autónomas con servicios transferidos. Este procedimiento ha supuesto en el ejercicio 1990 dos tratamientos diferenciados para estas operaciones, puesto que las aplicaciones de los créditos hasta 31.12.1987 se han abonado al Fondo de estabilización. En cualquier caso, se trata de una imputación indebida de gastos en las Entidades Gestoras con servicios transferidos, que se ha compensado con una aplicación a resultados hasta 31.12.1987 y que por los ejercicios posteriores figura como pasivo ficticio acreditado a las Comunidades Autónomas. Por lo que se refiere a las consignaciones presupuestarias para dotación a los fondos de amortización de inmuebles propiedad de la Seguridad Social y en uso por las Comunidades Autónomas, se reitera la necesidad de que los mismos se establezcan en función de los correspondientes activos.

La cuenta "Otros Entes", presenta un saldo de 93.926 millones de pesetas distribuido en las siguientes subcuentas: "Instituto Nacional de Empleo c/c" con 17.878 millones, "Fondo de Garantía Salarial c/c" con 49.333, "Participación en cuotas de formación profesional" con 16.974 y "Otras entidades c/c" con 9.741 millones. En relación con la divisionaria "Instituto Nacional de Empleo c/c" hay que señalar que no se ha producido conciliación entre ambas Entidades y que de las diversas cuentas que en el balance del INEM figuran como relacionadas con la Tesorería General se puede determinar un saldo de 2.657 millones de signo deudor, por lo que las diferencias de conciliación pueden cuantificarse en 15.221 millones. Además, en la cuenta "Partidas pendientes de aplicación" de la Tesorería General figura una subcuenta denominada "Diferencias de conciliación con el INEM" con un saldo de 12.213 millones, lo que elevaría la suma de diferencias a 27.434 millones. Del análisis de la información recibida se deduce que no son uniformes los criterios de imputación de operaciones recíprocas, lo que dificulta seriamente las tareas de conciliación que, por otra parte, no se han acometido.

La cuenta "Fondo de Garantía Salarial c/c" registra un saldo acreedor de 49.333 millones de pesetas, de los que 8.022 millones corresponden al movimiento neto del ejercicio y el resto 41.311 millones, a operaciones sin liquidar de los ejercicios anteriores. No existe constancia de conciliación.

"Participación en cuotas de formación profesional". Figura con un saldo neto de 16.974 millones de pesetas a favor de diversos Organismos de la Administración del Estado y otros (Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Junta Central de F.P., etc.), sin variación desde el ejercicio 1987 y cuyo 98,3% procede del ejercicio 1985 y anteriores. Dada la antigüedad de las partidas y los titulares de las mismas, procede un análisis sobre la vigencia de estos créditos en orden a su liquidación o baja en contabilidad.

La cuenta "Otras Entidades c/c". Con 9.741 millones de pesetas de saldo, distribuido entre "Renfe c/c" con 9.607 millones y "Otras Entidades" con 134 millones netos correspondiente a Organismos extinguidos: Instituto de Estudios de la Seguridad Social (95 millones H), Instituto Español de Emigración (1.401 millones D), Universidades Laborales (1.883 millones H) y "Varios" (sin especificar, con 443 millones D). No existe constancia de conciliación en ningún caso y se mantienen saldos con Organismos extinguidos, cuyos componentes en general tienen varios años de antigüedad. En el caso de la subcuenta "Varios" el origen se remonta al año 1979, todo lo cual pone de manifiesto la necesidad de urgentes actuaciones para el saneamiento de estos pasivos.

La cuenta "Partidas pendientes de aplicación" presenta un saldo de 112.110 millones de pesetas desglosado en 98.760 de "Otras cuentas" y 13.350 de "Diferencias de conciliación entre Entidades del Sistema". Esta rúbrica se ha analizado conjuntamente con la correspondiente de activo.

"Operaciones en curso". Con un saldo de 12.857 millones de pesetas, representa el neto de numerosas divisionarias de uno y otro signo en las que se formalizan operaciones de muy diversa naturaleza que no se corresponden con transferencias de efectivo en curso de realización. Numerosas partidas e incluso divisionarias completas proceden de ejercicios con varios años de antigüedad (hasta 1981), lo que unido al signo del saldo de la cuenta, que es contrario al que normalmente debe presentar según la normativa aplicable, pone de manifiesto la necesidad, reiteradamente señalada, de actuaciones de análisis y saneamiento de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado I.f de la Resolución de la Comisión Mixta se ha recibido, durante el trámite de alegaciones, informe de la Intervención General de la Seguridad Social donde se expone el inicio de los trabajos de análisis y depuración de esta cuenta, se plantean cruces internos de partidas y se aporta detalle de la composición del saldo de una de las divisionarias.

Cuentas de orden y especiales

Este grupo presenta un saldo de 805.029 millones de pesetas distribuido en nueve cuentas, de las cuales algunas tienen el carácter meramente informativo específico del grupo, pero otras, por el contrario, recogen operaciones propias de cuentas patrimoniales.

Respecto a las primeras, no se cumple en todos los casos la función informativa indicada, dada la falta de detalles pormenorizados de su contenido, mereciendo especial mención la cuenta "Valores mobiliarios depositados" en la que se produce discordancia con la situación que refleja la cuenta patrimonial ("Valores mobiliarios") sobre la que debería aportar información complementaria, y la cuenta "Cupones y láminas de Regímenes Especiales emitidos/depositados" con 1.227 millones de pesetas de saldo que corresponde en su mayor parte (el 99,3%) a "Diferencias cierre del ejercicio 1980 y apertura de 1981" en Servicios Centrales, en la que además se da la circunstancia de presentar saldo acreedor la que se acumula a las de activo y deudor la que se acumula a las de pasivo.

Por otra parte, figuran en este grupo de cuentas saldos relativos a derechos realizables, tal es el caso de "Deudores por cotización", "Deudores por prestaciones", "Deudores por subvención Fondo de solidaridad" y "Entidades sustitutorias".

La cuenta "Deudores por cotización" con un saldo global de 712.931 millones de pesetas, relativo a recaudación pendiente de cobro, se distribuye en dos subcuentas: "Por certificaciones descubierto a cobrar por Unidades de Recaudación Ejecutiva (URES)" con 458.514 millones y "Por aplazamiento y fraccionamiento" con 254.417 millones. En el ejercicio 1990 se han cancelado varias subcuentas que a 31.12.1989 presentaban saldo por importe de 1.249.164 millones, en las que figuraba contabilizada la deuda reclamada en vía voluntaria. No se han recibido relaciones de los deudores por cotización que permanecen contabilizados ni documentación justificativa de las bajas practicadas.

"Deudores por prestaciones" presenta un saldo de 646 millones de pesetas sin documentar con la correspondiente relación nominal. Hay que señalar, al igual que en la cuenta anterior y como también se ha puesto de manifiesto en la misma rúbrica del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la improcedencia de la formalización en cuentas de orden de las prestaciones indebidamente pagadas, ya que constituyen auténticos derechos de la Seguridad Social que deben tener el consiguiente reflejo patrimonial en el activo del balance de la Entidad.

La cuenta "Deudores por subvenciones Fondo de Solidaridad" presenta un saldo de 193 millones de pesetas del que tampoco se dispone de información para un seguimiento y control adecuados. Como ya se ha indicado y dada su naturaleza, no procede su inclusión en este grupo.

Similares circunstancias concurren en la cuenta "Entidades sustitutorias", con un saldo de 58.410 millones, representativa de las deudas que Organismos y empresas que se han integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, procedentes de Regímenes de previsión social propios, han contraído con la Tesorería General en concepto de coste de la integración. No se ha recibido información justificativa del saldo, que, por otra parte, debería figurar en cuentas patrimoniales.

II.3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

En este apartado se analizan los resultados del ejercicio con exclusión de los relativos a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se incluyen en el epígrafe específico de estas Entidades.

Dicho análisis se basa fundamentalmente en la "Cuenta de gestión por operaciones corrientes" (agregado de Entidades Gestoras y Tesorería General) elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en las cuentas de gestión de las Entidades.

Según los datos contenidos en dicho estado contable, el resultado neto de 1990 asciende a 38.838 millones de pesetas de superávit, cifra que se desglosa en un resultado positivo por operaciones presupuestarias de 65.037 millones y otro negativo por operaciones extrapresupuestarias de 26.199 millones. Los principales componentes de estos resultados figuran en el detalle que sigue:

GASTOS	IMPORTE	INGRESOS	IMPORTE
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			
- Prestaciones económicas directas	4.195.479	- Cuotas cobradas	4.272.970
- Asistencia sanitaria	2.008.453	- Rentas e intereses del patrimonio	1.198
- Servicios sociales	172.680	- Transf.internas del Sist.Seg. Social	136.739
- Gastos generales y otros	130.617	- Transferencias externas	2.050.912
- Transf.internas del Sist.Seg. Social	164	- Ingresos por servicios prestados	111.643
- Transf.externas por operaciones capital	1.032		
- Resultado por op.presup.(Superávit)	65.037		
TOTAL	6.573.462	TOTAL	6.573.462
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS			
- Obligaciones anuladas	(20)	- Derechos anulados	(19.183)
- Variación existencias	7.589	- Bº en amortiz.o venta de valores	6
- Pérdidas en enajenaciones	10	- Bº en enajenación inmóvil.material	557
		- Resultado por op.extrap.(Déficit)	26.199
TOTAL	7.579	TOTAL	7.579
RESULTADO TOTAL (Superávit) 38.838			

Importes en millones de pesetas.

A continuación se analizan los distintos componentes de los resultados presupuestarios y extrapresupuestarios, especificando las omisiones de operaciones, tanto las derivadas de la gestión propia y ordinaria de las distintas Entidades como las de carácter extraordinario que, de haber sido objeto de un tratamiento homogéneo, hubieran afectado a dichos resultados.

II.3.1.- RESULTADOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

En el ejercicio que nos ocupa se han formalizado un total de gastos por operaciones presupuestarias de 6.508.425 millones de pesetas, frente a un total de ingresos de 6.573.462 millones, de lo que se deriva un superávit de 65.037 millones, sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se formulan.

Ingresos

La cifra presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como cuotas cobradas (4.272.970 millones de pesetas) es inferior en 24.748 millones a la que por tal concepto figura en la cuenta de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social, al considerarse indebidamente por aquél los ingresos por recargo de mora como ingresos por servicios prestados. El procedimiento seguido por el Ministerio en materia de agregación de cuentas de gestión desvirtúa los datos que facilitan los correspondientes estados contables de las Entidades, al obtenerse directamente de las cuentas de liquidación de presupuesto, en lugar de ser el resultado de la acumulación de las respectivas cuentas de gestión.

No se aceptan las alegaciones formuladas. El considerar cuotas cobradas como ingresos por servicios prestados no constituye una mera imprecisión de la cuenta de gestión agregada, sino el tratamiento de los recursos de forma inadecuada a su naturaleza, que produce, en todo caso, una desviación de la realidad de la gestión. El procedimiento que sigue el Ministerio no dispone de la información necesaria para la obtención de las cuentas de gestión.

Las Entidades como resultado de su propia contabilidad elaboran este estado anual y el Ministerio de acuerdo con el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social procederá a su integración.

En transferencias internas del Sistema de la Seguridad Social se reflejan gastos por importe de 164 millones de pesetas e ingresos por valor de 136.739 millones. El neto resultante no se compensa con los conceptos correspondientes de la cuenta de gestión agregada de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dando lugar a un importe superior de ingresos sobre gastos que asciende a 378 millones, lo que incidiría en los resultados del ejercicio reduciendo el superávit en la mencionada cantidad. De otra parte y por lo que se refiere a los ingresos por servicios prestados por INSALUD a Entidades del Sistema que forman parte de este epígrafe, se observa que figuran computados 3.895 millones, en tanto que según información aportada por la citada Entidad los mismos ascienden a 1.902 millones.

En transferencias externas figuran como recursos realizados 2.050.912 millones de pesetas, que incluyen 55.143 millones de transferencias procedentes del INEM, respecto de los cuales este Organismo no ha formulado propuestas de pago, existiendo por tanto discordancia entre las cifras de la Entidad transferidora respecto de la receptora.

En ingresos por servicios prestados el importe que figura en la cuenta de gestión, 111.643 millones de pesetas, es superior en 24.748 millones al que refleja en el mismo estado contable la Tesorería General de la Seguridad Social, debido, como se ha indicado, a la inclusión de los ingresos por recargo de mora. De los 86.895 millones restantes destacan 36.193 millones por servicios de asistencia sanitaria gestionada por el INSALUD y 44.605 millones de ingresos varios. Respecto a los primeros, la información aportada por dicha Entidad gestora arroja cifras muy inferiores, existiendo una diferencia con los datos de la cuenta de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a 21.174 millones, localizándose el 99% de esta diferencia en ingresos procedentes del sector público. En cuanto a ingresos varios, se observa falta de homogeneidad en el tratamiento de operaciones de igual naturaleza, tal es el caso de obligaciones anuladas, que unas veces reciben tratamiento presupuestario y otras extrapresupuestario, o el de reintegro de prestaciones indebidas, que en unas ocasiones figura deducido de gastos y en otras aplicado a ingresos. Asimismo, se incluyen saldos derivados de operaciones que no tienen el carácter de servicios prestados (recargos y multas, costas de procedimiento ejecutivo, etc.)

Gastos

De la misma manera que se ha indicado en relación con los ingresos, se observa que los datos presentados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social difieren de los obtenidos agregando las cuentas de gestión de las distintas Entidades, como consecuencia del procedimiento que sigue dicho Departamento en la elaboración de este estado contable. En la información recogida en el cuadro resumen de resultados al que se viene haciendo referencia se producen diferencias compensadas entre servicios sociales y transferencias internas respecto al INSERSO por importe de 449 millones, como consecuencia de que el Departamento aplica a transferencias externas gastos que la Entidad gestora incluye como servicios sociales. Asimismo y dentro del grupo de gastos de asistencia sanitaria, se producen también diferencias compensadas con las cifras que presenta el INSALUD entre los diferentes tipos de prestaciones que integran la función de asistencia sanitaria, como consecuencia del ya mencionado procedimiento de elaboración de la cuenta de gestión agregada.

No se aceptan las alegaciones. Es de aplicación lo manifestado en el apartado precedente de Ingresos.

Por otra parte, y como ya se ha mencionado en el epígrafe correspondiente al análisis del Balance, se han contabilizado en "Partidas pendientes de aplicación" y por consiguiente activado, gastos no imputados al presupuesto del ejercicio, que en el INSALUD ascienden a 19.299 millones (14.564 millones del ejercicio 1990 y el resto de 1989) y en la Tesorería General de la Seguridad Social, al menos, a 3.061 millones, por intereses de pólizas de crédito suscritas con el Banco de España. En las mismas circunstancias y derivados de operaciones de depuración de cuentas permanecen pendientes de aplicación presupuestaria y subsiguiente formalización contable como gastos 56.881 millones de pesetas.

Además de tales gastos, es necesario resaltar la existencia de obligaciones sin cobertura crediticia derivadas del coste de asistencia sanitaria del ejercicio 1990 y anteriores, que no han tenido reflejo contable alguno y para cuya cancelación ha sido necesario instrumentar la concesión de un crédito extraordinario de 280.558 millones de pesetas (Real Decreto Ley 6/1992, de 13 de noviembre).

Todo lo anterior cuestiona el superávit por operaciones presupuestarias que viene luciendo en las cuentas de la Seguridad Social desde el ejercicio 1985.

No se acepta la alegación. Las cifras de gastos realizados sin cobertura presupuestaria que se citan en el Informe, con independencia de la conclusión del proceso de depuración, son claramente indicativas de que el superávit que viene luciendo en las cuentas de la Seguridad Social no se ajusta a la realidad económica.

II.3.2.- RESULTADOS POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

El resultado neto por operaciones extrapresupuestarias de la cuenta de gestión arroja un déficit de 26.199 millones de pesetas, compuesto de una minoración neta de ingresos por 18.620 millones y un incremento neto de gastos de 7.579 millones.

Por lo que se refiere a la minoración de ingresos, se han computado derechos anulados por valor de 19.183 millones de pesetas, que constituyen el componente más destacable de tal resultado y que se desglosa en los conceptos: derechos anulados del ejercicio corriente (2.246 millones), derechos anulados de ejercicios cerrados (16.371 millones) y derechos incobrables anulados de ejercicios cerrados (566 millones). Del análisis de las partidas integrantes de estos saldos se desprende que no existe diferenciación contable entre pagos por devolución de ingresos y anulación de derechos incobrables y que estos últimos no se han instrumentado, salvo algunas excepciones, de expedientes de baja en contabilidad tramitados de acuerdo con el procedimiento establecido por la Resolución de 26.2.1990 de la Secretaría General para la Seguridad Social. Por otra parte, también se ha observado la inclusión de operaciones de naturaleza impropia del concepto que nos ocupa y otras no debidamente identificadas (devolución de depósitos recibidos, reintegros de prestaciones, e incluso algunas partidas de signo acreedor).

Por último, hay que reseñar que no se han computado a efectos de la presentación del resultado del ejercicio los pagos que por cuenta del Estado y por el concepto de LISMI se han efectuado sin la financiación adecuada y que han ascendido a 18.582 millones de pesetas, importe que directamente se ha abonado en la cuenta "Fondo de estabilización", como ya se ha indicado en el epígrafe correspondiente. Asimismo, tampoco se han computado las variaciones de carácter patrimonial imputadas directamente a dicho Fondo.

II.4.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto del Sistema de la Seguridad Social comprende el de las Entidades Gestoras, el de la Tesorería General de la Seguridad

Social y el de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y se aprobó por Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Hasta dicha aprobación ha regido la prórroga del presupuesto inicial para el ejercicio 1989, conforme a las previsiones contenidas en el art. 134.4 de la Constitución y el art. 56 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria.

El presupuesto de la Seguridad Social para el ejercicio 1990 asciende, una vez deducidas las amortizaciones, reservas y transferencias internas, a 6.454.334 millones de pesetas, lo que supone un crecimiento del 18,03% sobre el presupuesto aprobado para 1989.

Se han realizado recursos por un importe de 6.774.603 millones de pesetas que representan un índice de ejecución presupuestaria del 105%. De dicha cifra corresponden a operaciones corrientes el 98,77% y a operaciones de capital el 1,23%, esto es 6.690.979 y 83.624 millones, respectivamente, datos demostrativos de la escasa importancia del segundo concepto respecto del primero en el Sistema de la Seguridad Social. En relación con el ejercicio anterior, los recursos realizados superan en 850.099 millones a los de 1989, lo que supone, en términos relativos, un 14,35% de incremento. Su distribución se refleja en el Anexo 1.

El presupuesto definitivo de gastos ascendió a 6.873.901 millones de pesetas, que respecto del presupuesto inicial aprobado representa un incremento del 6,50% como consecuencia de las modificaciones presupuestarias. El gasto total neto ascendió a 6.750.854 millones con una tasa de variación respecto a 1989 del 15,09%, correspondiendo a operaciones corrientes la cantidad de 6.619.439 millones y a operaciones de capital 131.415 millones, lo que representa el 98,05% y el 1,95%, respectivamente, según el detalle que se recoge en el Anexo 2. Las prestaciones económicas constituyen el gasto más importante de los que se integran en la estructura del Sistema, ascendiendo a 4.286.254 millones de pesetas, el 63,49 del gasto total realizado.

II.4.1.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ENTIDADES

En este apartado se analizan las cuentas de liquidación del presupuesto con exclusión de las relativas a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se incluyen en el epígrafe específico de estas Entidades.

El presupuesto de recursos corresponde en su totalidad a la Tesorería General de la Seguridad Social y presenta un valor inicial (sin eliminaciones por consolidación) de 6.339.429 millones de pesetas, ascendiendo los recursos realizados a 6.576.085 millones, lo que supone un porcentaje de ejecución presupuestaria del 103,73%, correspondiendo a las operaciones corrientes un 4,35% de exceso sobre el presupuesto inicial, en tanto que las de capital son inferiores a las presupuestadas en un 41,49%. El resumen de la liquidación del presupuesto de recursos se presenta en el Anexo 3.

La aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social supone un ingreso (recursos realizados) de 2.050.912 millones de pesetas que corresponden a:

	Millones de Ptas.
- Aportación de la Administración del Estado	1.739.950
- Aportación de Organismos Autónomos Administrativos	310.962

La aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de la asistencia sanitaria del INSALUD se presupuestó inicialmente en 1.237.539 millones de pesetas, habiéndose realizado finalmente 1.335.857 millones. Esta subvención es superior en 134.646 millones a la del año anterior en su presupuestación inicial y en 157.536 millones en cuanto a los recursos efectivamente realizados en uno y otro año.

Entre las "Propuestas de pago expedidas" del presupuesto del Estado y los "Recursos realizados" del presupuesto de la Seguridad Social, existen las diferencias que se reflejan en el siguiente cuadro, en millones de pesetas:

		Recursos realizados	Propuestas de pago	Diferencia
OPERACIONES CORRIENTES:				
400	De la Admón del Estado del Dpto. a que está adscrito			
9	Otras	103.566	104.048	(482)
401	De la Admón del Estado de otros Dptos. Ministeriales	--	69	(69)
410	De OO.AA. Administrativos Transf. corrientes Org. Adm.			
1	Del INEM por cuotas desempleados	265.400	215.319	50.081
2	Del INEM por bonif. cuot. para fom. empl.	45.562	40.500	5.062
	TOTAL	414.528	359.936	54.592
OPERACIONES DE CAPITAL:				
701	De la Admón. del Estado De otros Departamentos Ministeriales	47.485	46.730	755
	TOTAL	47.485	46.730	755

De los datos que anteceden destaca la diferencia de 55.143 millones de pesetas de mayores recursos formalizados por la Tesorería General en relación con las propuestas de pago expedidas por el INEM. El resto de las diferencias de operaciones corrientes corresponden a transferencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fundamentalmente por ayudas para jubilación anticipada. En cuanto a las diferencias por operaciones de capital, se derivan de aportaciones del exterior (fondos FEDER)

En los últimos ejercicios la tendencia de la participación del Estado en la financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, se invierte en 1989 y 1990 en términos relativos de participación (el 19,46% y 19,29%, respectivamente), siendo así que venía experimentando importantes incrementos hasta alcanzar en el ejercicio 1988 el 23,12% del total de los ingresos. Esta aportación financia el 66,19% de las operaciones corrientes del INSALUD, que alcanzan la cifra de 2.018.273 millones de pesetas.

Otros componentes de las transferencias corrientes son las aportaciones finalistas del Estado (ayudas a jubilación anticipada, Ley de Integración Social de Minusválidos -LISMI-, complementos para mínimos de pensiones y otros) por un importe de 316.984 millones, con un porcentaje de realización del 112,38%.

Sigue sin recibirse información de la tramitación de los expedientes a iniciar por las Entidades Gestoras INSALUD e INSERSO para el reintegro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social al Tesoro Público del importe de las subvenciones finalistas recogidas en el presupuesto de la Seguridad Social del ejercicio 1984, cuyos créditos no fueron invertidos o incorporados al ejercicio siguiente, por importe de 491 y 3.444 millones de pesetas, respectivamente. Esta situación fue puesta de manifiesto en el Informe anual de 1984 y la Intervención General de la Seguridad Social en escrito de 13.10.1988, aceptando los criterios expuestos por el Tribunal, dispuso el inicio de los correspondientes expedientes de reintegro.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha formalizado en su contabilidad financiera y presupuestaria ("Ingresos diversos. Ingresos gestión INSALUD") 5.214 millones de pesetas en concepto de subvenciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, del Ministerio de Educación y Ciencia y otras varias. La información recibida sobre estas subvenciones no especifica con suficiente detalle el origen de las partidas que integran las mismas, lo que impide establecer la concordancia con las correlativas de los presupuestos de los Organismos aportantes.

En cuanto al presupuesto de gastos, presenta el desarrollo siguiente por Entidades, en millones de pesetas:

Entidad	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto total	Obligaciones	Remanente
INSS	4.120.988	93.662	4.214.650	4.156.501	58.149
INSALUD	1.851.144	233.409	2.084.553	2.065.984	18.569
INSERSO	169.250	29.306	198.556	187.435	11.121
I.S.M.	108.520	1.398	109.918	107.385	2.533
TESORERÍA	89.527	4.237	93.764	76.011	17.753
TOTAL	6.339.429	362.012	6.701.441	6.593.316	108.125

Como en años anteriores, la mayor parte del presupuesto corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, con un 62,89% del total crédito disponible, al que sigue en orden de importancia el Instituto Nacional de la Salud, con una participación del 31,11%.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social absorben el 6% restante del presupuesto total. El resumen de la liquidación del presupuesto de gastos se presenta en el Anexo 4.

Tal como se refleja en el cuadro precedente y se desarrolla en el Anexo 5, las modificaciones de créditos del ejercicio ascienden a 362.012 millones de pesetas, que representan el 5,71% del presupuesto inicial.

La ejecución del presupuesto de gastos de las Entidades Gestoras y Servicio Común, con un índice de realización del 98,39%, se especifica a continuación en millones de pesetas, desglosando las obligaciones reconocidas por areas funcionales y separando las de gestión directa de las de gestión transferida a Comunidades Autónomas:

	Gestión directa	Gestión transferida a CC.AA	Total obligaciones reconocidas
Prestaciones económicas	4.238.910		4.238.910
Asistencia sanitaria	1.000.093	1.027.595	2.027.688
Servicios sociales	135.161	43.214	178.375
Administración	62.420		62.420
Total operaciones corrientes	5.436.584	1.070.809	6.507.393
Inversiones reales	82.805	---	82.805
Activos y pasivos financieros	2.085	---	2.085
Transferencias de capital	1.033	---	1.033
Total operaciones capital	85.923	---	85.923
Total presupuesto realizado	5.522.507	1.070.809	6.593.316

Las prestaciones económicas han tenido un índice de realización del 98,65% y una tasa de variación respecto de 1989 del 13,92%.

Por lo que se refiere a las áreas de asistencia sanitaria y servicios sociales, el análisis está mediatizado por las magnitudes correspondientes a las funciones transferidas a las Comunidades Autónomas, respecto a las cuales se incluyen en el capítulo 4 del presupuesto la totalidad de las remesas de fondos a efectuar y en los capítulos 2 y 5 las operaciones de compensación y formalización que les afectan.

En el ejercicio 1990 las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en el área de asistencia sanitaria son: Cataluña, Andalucía, País Vasco y Valencia. El importe global de los créditos ascendió a 1.031.698 millones de pesetas, de los cuales corresponden a remesas de fondos 1.017.812 millones. Esta cantidad supone un 49,49% del presupuesto total del INSALUD, por lo que, de la información del Sistema de la Seguridad Social, cualquier conclusión que pretenda obtenerse mediante el análisis de la gestión presupuestaria sobre la distribución del gasto sanitario, ha de tener únicamente el valor de estimaciones derivadas de los gastos no transferidos, que representan poco más del 50%, tanto por funciones como en atención a su naturaleza (e incluso la clasificación entre operaciones corrientes y de capital).

En el área de los servicios sociales las Comunidades Autónomas con competencias transferidas son: Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, Canarias y País Vasco. El importe global de los créditos ascendió a 43.214 millones de pesetas, de los que corresponden a remesas de fondos 39.810 millones. El total presupuesto del INSERSO referido a todo el territorio nacional ascendió a 198.556 millones, por lo que los servicios sociales transferidos representan el 21,76% del total. Al igual que en el área sanitaria, se ponen de manifiesto las mismas dificultades para un análisis general.

Los gastos imputados al presupuesto de 1990, en virtud de las previsiones recogidas en el art. 150.4 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, ascendieron a 77.605 millones de pesetas (el 1,18% del total obligaciones reconocidas), importe que por Entidades Gestoras se desglosa como sigue, en millones de pesetas:

	Importe
INSALUD	77.006
INSERSO	62
I.S.M.	389
T.G.S.S.	148
T O T A L	77.605

A continuación se exponen los resultados del análisis de las cuentas de liquidación de los presupuestos de las Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social en su doble aspecto de presupuestos económicos y presupuestos por programas, si bien, hay que señalar respecto a estos últimos que el grado de fiabilidad de los datos aportados está afectado, como ya se ha señalado en Informes anteriores, por el hecho de que el seguimiento presupuestario se ha realizado solamente a nivel de grupo de programas. Se presenta en el Anexo 6 un resumen del grado de ejecución de los grupos de programas sobre las dotaciones definitivas de los presupuestos respectivos.

II.4.1.1.- Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Presupuesto económico

El presupuesto aprobado inicialmente asciende a 4.120.988 millones de pesetas, lo que supone un incremento respecto al de 1989 del 17,69%. Las operaciones corrientes representan la casi totalidad de los gastos previstos. En Anexo 7 se presenta un resumen de la liquidación del presupuesto de esta Entidad.

El presupuesto inicial ha sufrido modificaciones a lo largo del ejercicio por importe de 93.662 millones de pesetas (un 2,27%), lo que ha dado lugar a un presupuesto total de 4.214.650 millones. Las variaciones se produjeron fundamentalmente en el art. 48 "Transferencias a las familias e instituciones sin fines de lucro", en concepto de prestaciones económicas (créditos ampliables). En el análisis de las modificaciones de crédito se observa la existencia de remanentes ficticios por importe de 31.084 millones (un 33,19 % de las modificaciones), que distorsionan la cuenta de liquidación del presupuesto y que se producen como consecuencia de la formalización de ampliaciones de crédito por dicho valor financiadas con excedentes previstos en otras rúbricas.

No se acepta la alegación. El Tribunal de Cuentas considera que son auténticos remanentes ficticios que distorsionan la información de la Cuenta de liquidación del presupuesto, dando lugar a que ésta, presente remanentes superiores a los realmente existentes. Se deben de aplicar los mecanismos contables que permitan corregir estas situaciones.

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 4.156.501 millones de pesetas, con un índice de realización sobre el presupuesto del 98,62%. Del total de gastos corrientes del año, 4.148.736 millones, prácticamente la totalidad, corresponden a prestaciones económicas. Las obligaciones reconocidas por operaciones de capital ascendieron a 7.765 millones, de los que 7.341 millones son inversiones reales.

Las prestaciones económicas según cuenta de gestión ascendieron a 4.105.929 millones de pesetas, correspondiendo al Régimen General una tasa de participación del 62,63%. Por tipo de prestaciones las más importantes son las pensiones, con un 90,15% del total, seguidas del subsidio por incapacidad laboral transitoria, que representa el 8,09%. Por otra parte y como en ejercicios anteriores, las prestaciones de protección a la familia han seguido decreciendo en el año 1990, suponiendo un 3,21% de variación negativa respecto de 1989.

Presupuesto por programas

Por lo que se refiere al análisis del presupuesto por programas, se observa que existen diferencias entre la información remitida al Tribunal de Cuentas por la Entidad Gestora y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en "Gestión del fondo especial de prestaciones complementarias de funcionarios de la Seguridad Social", "Convenios y relaciones internacionales" y "Formación de personal". Asimismo, se han detectado numerosos errores en la cuantificación de los porcentajes de realización de los objetivos de los programas.

No se aceptan las alegaciones. Los errores a que se acaba de aludir surgen como consecuencia de que, en el sistema automático utilizado, los porcentajes se cuantifican simplemente por cociente entre los importes realizados y los programados, sin tener en cuenta el carácter (minoración o incremento) del objetivo a alcanzar.

II.4.1.2.- Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)

Presupuesto económico

El presupuesto aprobado se eleva a 1.851.144 millones de pesetas, que representa respecto al ejercicio 1989, un incremento del 17,61%. A operaciones corrientes corresponden 1.806.051 millones y a operaciones de capital 45.093 millones. En la cifra de operaciones corrientes está incluida la totalidad del presupuesto correspondiente a las Comunidades Autónomas con servicios transferidos, que asciende a 903.168 millones. En el Anexo 8 se presenta un resumen de la liquidación del presupuesto de esta Entidad.

Las modificaciones presupuestarias del ejercicio ascienden a 233.409 millones de pesetas, que suponen un incremento del 12,61% respecto de los créditos inicialmente aprobados, por lo que resulta un presupuesto final de 2.084.553 millones. Del total de modificaciones, 77.006 millones (el 32,99%), cubren obligaciones de ejercicios anteriores imputadas al presupuesto de 1990 (independientemente de los importes, no cuantificados, que hayan podido aplicarse a los créditos consignados en el presupuesto inicial). En el análisis de las variaciones se aprecia que el 55,07% corresponde al grupo de programas "Transferencias a Comunidades Autónomas", en el que se produce un 14,23% de incremento sobre los créditos inicialmente aprobados. El resto de las modificaciones corresponde a la gestión no transferida del INSALUD y supone un 11,06% de su presupuesto inicial, lo que representa un diferente índice de participación en las modificaciones presupuestarias de esta Entidad.

En el examen de los expedientes de modificaciones de crédito se observa que hay diferencias en la aplicación presupuestaria de las propuestas tramitadas por la Entidad Gestora y las que figuran en la liquidación del presupuesto, en los siguientes grupos de programas y artículos:

Programas Artículos	Presupuesto inicial	Modificación s/expedientes	Mod. s/liquid. presupuesto	Diferencia
21-12	91.876.776.000	10.981.968.669	11.268.180.869	(286.212.200)
21-13	7.673.612.000	(456.609.698)	252.396.302	(709.000.000)
21-15	6.125.292.000	(1.829.182.541)	(1.289.755.541)	(539.427.000)
21-16	17.404.338.000	303.300.000	333.300.000	(30.000.000)
22-12	263.664.653.000	31.585.122.211	26.862.838.011	4.722.284.200
22-13	13.003.233.000	228.958.378	728.958.378	(500.000.000)
22-15	26.496.772.000	(12.554.049.998)	(10.191.404.998)	(2.362.645.000)
22-16	47.235.931.000	(130.412.708)	(25.412.708)	(105.000.000)
26-12	11.980.392.000	(474.413.671)	(384.413.671)	(90.000.000)
26-16	3.319.875.000	(186.871.100)	(86.871.100)	(100.000.000)

—o—

En relación con las diferencias que anteceden hay que señalar que las mismas se derivan de la aplicación de las modificaciones a conceptos distintos de los aprobados. En todo caso, no se ha podido efectuar un seguimiento de las modificaciones por conceptos, ya que algunas se han tramitado a nivel de artículo y no con el grado de desagregación de elaboración del presupuesto, como es preceptivo.

Respecto a la ejecución del presupuesto, las obligaciones reconocidas se elevaron a 2.065.984 millones de pesetas, lo que representa un índice de realización del 99,11%. Los gastos corrientes ascendieron a 2.018.273 millones, de los que corresponden a servicios transferidos a Comunidades Autónomas 1.027.595 millones. Las obligaciones contraídas por operaciones de capital han totalizado 47.711 millones.

Los gastos de ejercicios anteriores imputados al presupuesto de 1990, en virtud del art. 150.4 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, ascendieron a los siguientes importes, en millones de pesetas:

Año	Importe
1986	233
1987	198
1988	2.832
1989	73.743
TOTAL	77.006

Presupuesto por programas

Esta Entidad, al igual que en los ejercicios 1988 y 1989, no ha remitido al Tribunal de Cuentas la información estadística de la ejecución del presupuesto por programas.

II.4.1.3.- Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)

Presupuesto económico

El presupuesto aprobado se eleva a 169.250 millones de pesetas, con un incremento respecto del ejercicio anterior del 47,42% debido a la evolución de los gastos derivados de la Ley de Integración Social de Minusválidos(LISMI). Del presupuesto inicial corresponden 156.854 millones a operaciones corrientes y 12.396 a operaciones de capital. En la cifra de operaciones corrientes está incluida la totalidad del presupuesto correspondiente a las Comunidades Autónomas con servicios sociales transferidos, que asciende a 40.561 millones. En el Anexo 9 se presenta un resumen de la liquidación del presupuesto de esta Entidad.

El presupuesto inicial se ha modificado durante el año en una cuantía total de 29.306 millones de pesetas (un 17,32%), lo que da lugar a un presupuesto total de 198.556 millones. Las modificaciones relativas a los servicios no transferidos alcanzan la cifra de 26.653 millones, lo que representa un incremento del 20,71%, mientras que las modificaciones de los servicios transferidos, grupo de programas "Transferencias a Comunidades Autónomas", alcanzan la cifra de 2.653 millones que representa un incremento del 6,54% respecto a su presupuesto inicial. Asimismo, las Comunidades Autónomas participan de los créditos para programas finalistas que figuran en otros grupos de programas por un importe de 2.173 millones de pesetas en operaciones corrientes y 42 millones en operaciones de capital, habiéndose ejecutado sólo las primeras con un índice de realización del 97,72%.

En el análisis de las modificaciones presupuestarias, algunos de cuyos expedientes figuran incompletos, se observa, en relación con la liquidación del presupuesto, la existencia de remanentes ficticios por importe de 775 millones (el 2,64%), como consecuencia de la formalización de ampliaciones de crédito por dicho valor financiadas con excedentes previstos en otras rúbricas. Asimismo, se observa la existencia de conceptos con variaciones positivas que presentan remanentes de importes superiores a dichas variaciones. Por otra parte y como consecuencia de la vinculación de créditos a nivel de artículo, figuran conceptos con dotación presupuestaria en los que no se han formalizado gastos, y otros sin dotación inicial ni modificación aprobada que sí los reflejan.

No se acepta la alegación. En varios expedientes (nº. 3, 4, 11, 13, 14 y 309) no consta la Memoria, Anexos a la misma, o Informe de la Intervención.

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 187.435 millones de pesetas, con un índice de realización del 94,40%. En relación con el ejercicio anterior el incremento de gasto supone un 36,85%. Los gastos corrientes ascienden a 175.814 millones, de los que corresponden a "Transferencias a Comunidades Autónomas" 43.214 millones. Las obligaciones contraídas por operaciones de capital han totalizado 11.621 millones.

Los gastos de ejercicios anteriores imputados al presupuesto de 1990, en virtud del art. 150.4 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, ascendieron a los siguientes importes, en millones de pesetas:

Año	Importe
1988	13
1989	49
TOTAL	62

Presupuesto por programas

Por lo que se refiere al análisis del presupuesto por programas, se observa que existen diferencias entre la información remitida a este Tribunal por la Entidad y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en "Integración social y atención a refugiados". Asimismo, se han detectado numerosos errores en la cuantificación de los porcentajes de realización de los objetivos de los programas.

No se aceptan las alegaciones. Los errores a que se acaba de aludir surgen, como consecuencia de que, en el sistema automático utilizado, los porcentajes se cuantifican simplemente por cociente entre los importes realizados y los programados sin tener en cuenta el carácter (minoración o incremento) del objetivo a alcanzar.

II.4.1.4.- Instituto Social de la Marina (ISM)

Presupuesto económico

El presupuesto aprobado se eleva a 108.520 millones de pesetas, de los que corresponden a operaciones corrientes 105.927 y 2.593 a operaciones de capital, experimentando un incremento del 16,30% en relación al ejercicio anterior. En el Anexo 10 se presenta un resumen de la liquidación del presupuesto de esta Entidad.

El presupuesto se ha modificado en el ejercicio en una cuantía total de 1.398 millones de pesetas, lo que representa un 1,29% de incremento, frente al 4,56% del ejercicio anterior. Destacan, por su participación, las modificaciones en el Capítulo IV del grupo de programas "Subsidio de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas" con 1.175 millones (el 84,05% del importe total de las modificaciones).

El presupuesto definitivo ascendió a 109.918 millones de pesetas. En el examen de los expedientes de modificaciones de crédito en relación con la liquidación del presupuesto, se observa que el procedimiento contable seguido en la formalización de variaciones autorizadas por importe de 625 millones (el 44,71%), que se financian con cargo a excedentes previstos en otras rúbricas, da lugar a la existencia de remanentes ficticios, dándose el caso, además, de que en algunas rúbricas financiadoras el remanente es insuficiente. El presupuesto total disponible ascendió a 109.293 millones. Debido a la vinculación de créditos a nivel de artículo, se ha observado la existencia de rúbricas con variaciones positivas cuyos remanentes superan en importe a dichas modificaciones, conceptos sin dotación inicial ni modificaciones que presentan gastos, y al contrario, otros con presupuesto aprobado que no los registran, y conceptos que presentan remanentes negativos, algunos de los cuales habían sufrido minoraciones.

No se aceptan las alegaciones. Las observaciones que preceden ponen de manifiesto formalizaciones incorrectas que dan lugar a que la cuenta de liquidación del presupuesto presente algunos datos que no reflejan fielmente la realidad de la ejecución presupuestaria.

Existen diferencias en las aplicaciones presupuestarias de algunos expedientes de modificaciones tramitados y las que figuran en la liquidación del presupuesto, que bien proceden de errores en la contabilización de tales modificaciones o de expedientes de transferencias de crédito no remitidos al Tribunal.

Programa Nº/concepto	Pptos. inicial	Modif. s/propuestas	Modif. s/Bgd. ppto.	Diferencia
44-6222	3.000.000	(4.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)
44-6240	5.000.000	(15.000.000)	(5.000.000)	(10.000.000)
44-6321	149.000.000	134.465.259	121.465.259	12.000.000
				—0—

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 107.385 millones de pesetas, lo que representa el 97,70% del presupuesto total y el 98,95% del inicial. Las operaciones corrientes alcanzaron un importe de 105.087 millones (el 97,86% del total) y las de capital 2.298 millones.

No se aceptan las alegaciones a las observaciones que preceden. En las mismas no se hace referencia al expediente de modificación de crédito nº 403/90 que da lugar a las diferencias señaladas.

Los gastos de ejercicios anteriores imputados al presupuesto de 1990, en virtud del art. 150.4 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, ascendieron a los siguientes importes, en millones de pesetas:

Año	Importe
1986	4
1987	1
1988	7
1989	377
TOTAL	389

Por su importancia en la participación del gasto total sobresalen las prestaciones económicas, con 87.687 millones de pesetas (el 81,66% del total).

Presupuesto por programas

Por lo que se refiere al análisis del presupuesto por programas, se observa que no existe total concordancia entre la documentación remitida al Tribunal de Cuentas por la Entidad y la elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en los siguientes programas: "Pensiones de invalidez permanente", "Acción asistencial y social", "Inscripción de empresas y afiliación de trabajadores", "Dirección y servicios generales", y "Control interno y contabilidad". Asimismo, se han detectado algunos errores en la cuantificación de los porcentajes de realización de los objetivos de los programas.

II.4.1.5.- Tesorería General de la Seguridad Social

Presupuesto de ingresos

En relación con el presupuesto de ingresos de la Tesorería, al que ya se ha hecho referencia en el apartado II.3.1, hay que señalar que el presupuesto inicial ascendió a 6.339.429 millones de pesetas y los recursos realizados a 6.576.085 millones, lo que supone un índice de ejecución presupuestaria del 103,73%, con una desviación positiva de 236.656 millones. En relación con el ejercicio 1989 se produce un incremento de los recursos realizados del 14,20%. Las desviaciones respecto al presupuesto inicial, en algunos conceptos muy importantes, aparecen sin justificar adecuadamente. Destacan: "Reintegros de ejercicios cerrados" con un índice de desviación del 1.102% (11.195,7 millones), "Reintegros de presupuesto corriente" con un índice de 1.106% (957,7 millones), "Ingresos diversos. Otros ingresos diversos" con un 684% (15.197,5 millones), "Intereses de títulos valores del Estado" con un 958% (53,9 millones), "Intereses de anticipos y préstamos concedidos a familias e instituciones sin fines de lucro. Otros" con un 665% (6,5 millones), "Reintegros de préstamos recibidos fuera del Sector Público, a corto plazo, al personal" con un 216% (1.167,8 millones) y "Reintegro de depósitos y fianzas. Reintegro de fianzas" con un 1.087% (21,7 millones). Todo lo cual pone de manifiesto, de una parte, la existencia de importantes deficiencias de presupuestación en operaciones cuya naturaleza permite estimar su realización con alto grado de aproximación y, de otra, deficiencias en la contracción de obligaciones que dan lugar a la existencia de tan elevados índices de anulaciones.

La recaudación por cuotas se eleva a 4.272.970 millones de pesetas, que representan el 65,48% de los recursos por operaciones corrientes y el 64,97% del total presupuesto. Respecto del

ejercicio 1989 experimenta un incremento del 13,02%. Esta evolución de la cotización de 1990 respecto de 1989 presenta variación positiva en el Régimen General (13,9%), en el Régimen Especial de Autónomos (9,95%), en el Régimen Especial Agrario (7,42%), en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (5,24%), en la cotización por Accidentes de Trabajo (13,61%) y en el Régimen Especial de la Minería del Carbón (13,41%); y negativa solamente en el Régimen Especial de Empleados de Hogar (4,47%).

Presupuesto de gastos y dotaciones. Clasificación económica

El presupuesto aprobado asciende a 89.527 millones de pesetas, lo que supone una disminución respecto del ejercicio anterior del 28,01%. Corresponden a operaciones corrientes 72.017 millones y 17.510 a operaciones de capital (el 80,44% y 19,56%, respectivamente). En el Anexo 11 se presenta un resumen de la liquidación de presupuesto de este Servicio Común. Las modificaciones aprobadas ascendieron a 4.237 millones de pesetas que representan un 4,73% del presupuesto inicial. El presupuesto definitivo totalizó 93.764 millones. En el examen de los expedientes de modificación de crédito, en relación con la liquidación del presupuesto, se observa que el procedimiento contable seguido en la formalización de variaciones autorizadas por importe de 991,5 millones (el 23,40%), que se financian con cargo a excedentes previstos en otras rúbricas, da lugar a la existencia de remanentes ficticios, siendo el presupuesto total disponible de 92.772,5 millones. Asimismo y como consecuencia de la vinculación a nivel de artículo, se observa la existencia de rúbricas con variaciones positivas, cuyos remanentes superan en importe a dichas modificaciones, conceptos sin dotación inicial ni modificaciones que presentan gastos, y al contrario, otras con presupuesto aprobado sin ninguna ejecución, y numerosos conceptos con remanente negativo.

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 76.011 millones de pesetas, con un grado de realización sobre el presupuesto total del 81,07%. Corresponden a operaciones corrientes 59.481 millones y 16.530 a operaciones de capital, destacando por funciones "Tesorería, información, y otros servicios" con 73.523 millones, que suponen el 96,73% del total.

Los gastos imputados al presupuesto de 1990, en virtud del art. 150.4 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, ascendieron a 148 millones. No se dispone de detalle de los ejercicios a que corresponden los gastos.

Presupuesto por programas

Por lo que se refiere al análisis del presupuesto por programas, se observa que existen diferencias entre la información remitida a este Tribunal por la Tesorería General de la Seguridad Social y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los programas "Inscripción de empresas y afiliación de trabajadores", "Recaudación en vía ejecutiva", "Gestión de pagos", "Dirección y servicios generales" y "Formación de personal". Asimismo, se han detectado numerosos errores en la cuantificación de los porcentajes de realización de los objetivos de los programas.

II.5.- MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

En este apartado del Informe se analizan las cuentas anuales de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Entidades colaboradoras de la Seguridad Social en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con personalidad jurídica propia y bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En dicho análisis, que se efectúa con los criterios ya referidos en cuanto a cumplimiento de la normativa aplicable, concordancia y coherencia de los distintos estados contables y representatividad económica, financiera y patrimonial de los mismos, se ha seguido un criterio de continuidad con lo analizado en ejercicios anteriores, si bien ampliando las comprobaciones, en paralelo con la recepción de información complementaria derivada de la normativa reguladora de las operaciones de cierre del ejercicio.

Al concluir el ejercicio 1990 el sector está integrado por 95 Mutuas, habiéndose modificado la cifra de 112 existentes en 1989 como consecuencia de la fusión de 6 y la absorción de otras 12 en el transcurso del ejercicio. Dichas Mutuas agrupan a 1.362.297 empresas con una población protegida de 8.345.019 trabajadores en las contingencias de invalidez, muerte y supervivencia y 8.109.117 en la de incapacidad laboral transitoria. La participación de estas Entidades en el total presupuesto realizado del Sistema de la Seguridad Social ascendió a un 5%, tanto en gastos como en ingresos, con valores absolutos de 348.043 y 348.001 millones de pesetas, respectivamente.

En materia de rendición de cuentas la Orden de 13 de diciembre de 1990, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 1990 y se determina la documentación contable que ha de rendirse por los agentes del Sistema de la Seguridad Social, establece en su artículo 6.3, la documentación complementaria a rendir por las Mutuas además de la elaboración de los estados contables de común aplicación a todas las Entidades.

El grado de cumplimiento de la citada norma se especifica a continuación, según el pormenor que contiene la misma y en relación con las carencias fundamentales observadas:

- Memoria de la ejecución del presupuesto: falta en un 26% de Mutuas.
- Inventarios: un 21% de las Mutuas no han remitido inventarios y el 41% los remiten de forma parcial.
- Cuenta de tesorería: falta la documentación del 4% de las Mutuas.
- Gastos imputados al presupuesto de 1990 por aplicación del art. 150.4 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria: sólo una Mutua ha enviado esta documentación.
- Enumeración y justificación de las dotaciones, aplicaciones y regularizaciones de cada una de las reservas obligatorias y fondos especiales: falta la documentación del 29% de las Mutuas.
- Anexos de cotización y prestaciones económicas: no se ha recibido la documentación en el 6% de las Mutuas.
- Anexo de inversiones: no se ha cumplimentado en los términos establecidos por la norma en el 13% de las Mutuas.
- Ingresos obtenidos en Centros de Prevención y Rehabilitación: falta la documentación del 62% de las Mutuas.
- Detalle de la cuenta "Reserva para siniestros pendientes de liquidación y pago": no se ha cumplimentado en el 26% de las Mutuas.
- Estado sobre ejecución de los planes de asistencia social por disposición del Fondo de Asistencia Social: falta la documentación del 40% de las Mutuas que han ejecutado planes de asistencia social.
- Dictámenes de la Intervención General de la Seguridad Social sobre auditorías de Mutuas con ingresos por cuotas superiores a 3000 millones: Solo se han recibido del 12,5% de las Mutuas para las que es preceptiva la remisión al Tribunal.
- Detalle de inversiones financieras: no han remitido documentación un 5% de las Mutuas.
- Dotación, actividad y coste de funcionamiento de los centros asistenciales: falta la documentación del 15% de las Mutuas.
- Detalle de la composición del patrimonio propio de las Mutuas y de los ingresos y gastos generados por el mismo: se carece de esta documentación en el 3% y 8% de las Mutuas, respectivamente.

II.5.1.- BALANCE DE SITUACIÓN

Se reitera lo manifestado en términos generales en el epígrafe II.2, por lo que se refiere a la falta de aplicación de un plan contable adecuado a la realidad económica de la Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha elaborado un balance agregado de Mutuas en el que se observan las siguientes incidencias (detalladas en Anexo 12):

- Se han agregado indebidamente[2] los balances de cuatro Mutuas absorbidas en el transcurso del ejercicio ("Mutua Cerealista de Cáceres", "La Mecánica", "La Única", y "La Metalúrgica Levantina"), cuyos elementos patrimoniales ya figuran incorporados en los balances de las absorbentes ("Mutual Cyclops" y "La Fraternidad"). El importe de la duplicidad producida asciende a un total de 380 millones de pesetas.
- En la agregación realizada se ha producido el cambio de ubicación del saldo de algunas cuentas, respecto de la que figura en el balance de la Mutua correspondiente, sin que se haya formulado aclaración al respecto. Se encuentran en este caso el saldo de la cuenta "Deudores por prestaciones" (14.776.085 Ptas.), de la "Mutua de Accidentes de Zaragoza", que se ha aplicado a la cuenta "Deudores diversos"; del saldo de la cuenta "Renta e intereses a cobrar no vencidos" (207.334 Ptas.), de la "Mutua Guanarteme", que se ha incluido en la cuenta "Déficit de Gestión" y del de la cuenta "Rentas e intereses cobrados por anticipado" (796.726 Ptas.), de la misma Mutua, que se recoge en la de "Renta e intereses a pagar no vencidos".

No se aceptan las alegaciones. En el balance de situación del ejercicio 1990 de la Mutua de Accidentes de Zaragoza, la cuenta "Deudores por prestaciones", sin ninguna modificación en su literal, presenta saldo por importe 14.776.085 ptas. según consta en el Anteproyecto de Informe Anual. Respecto a la Mutua Guanarteme tampoco son correctas las afirmaciones del Ministerio, ya que el importe que la Mutua consigna en su balance en la cuenta "Rentas e intereses a cobrar no vencidos" no se corresponde con el déficit de gestión como se deduce de la propia cuenta de gestión. Además en la cuenta "Rentas e intereses a pagar no vencidos" la Mutua no presenta saldo y el Ministerio hace figurar en dicha rúbrica el correspondiente a la cuenta "Rentas e intereses cobrados por anticipado"

Independientemente del análisis anterior, se ha examinado la correspondencia entre las variaciones experimentadas por las cuentas de balance desde 31.12.1989 hasta 31.12.1990 con las operaciones recogidas en la cuenta de capital, todo ello a partir

[2] A pesar de la nota aclaratoria que a este respecto figura en la Memoria explicativa de Departamento.

de los datos elaborados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que, en síntesis, arrojan los siguientes importes en millones de pesetas:

Rúbricas	Saldo s/balance 1990	Saldo s/balance 1989	Variación balances 1989/1990	Variación s/cuenta de capital	Diferencia
Préstamos recibidos externos	259,0	253,4	5,6	5,7	(0,1)
Inmovilizado material	42.445,6	34.604,6	7.841,0	7.895,1	(54,1)
Inmovilizado en curso	293,6	195,7	97,9	69,5	28,4
Inversiones financieras internas	1.605,0	1.838,7	(233,7)	(199,8)	(33,9)
Fianzas y depósitos	5.089,3	3.945,4	1.143,9	(829,9)	1.973,8
Inversiones financieras externas	75.842,2	66.395,5	9.446,7	7.974,6	1.472,1
T O T A L	125.534,7	107.233,3	18.301,4	14.915,2	3.386,2

Los datos anteriores ponen de manifiesto que no se produce la necesaria coherencia interna entre los mencionados estados contables.

La diferencia de 3.386,2 millones de pesetas representa la variación neta del balance por estas rúbricas contables que no ha sido recogida en la cuenta de capital. Este importe procede de diferencias de distinto signo en las cuentas que integran las agrupaciones detalladas anteriormente, y que alcanzan importes brutos superiores (5.293,5 millones positivos y 1.907,3 negativos). A estas deficiencias de la cuenta de capital, se añade el hecho de no estar compensadas las cifras que proceden de la columna "Traspasos entre cuentas", resultando un importe total de 763 millones en el debe y 753 en el haber de dicha columna, sin que se justifique esta circunstancia.

A continuación se exponen las observaciones derivadas del análisis de los distintos grupos de cuentas del balance agregado de Mutuas elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En los saldos que se detallan se han eliminado los relativos a las cuatro Mutuas duplicadas.

Financiación Básica

Este grupo de cuentas totaliza un importe de 145.252 millones de pesetas al 31.12.1990, distribuido en los subgrupos: "Reservas" con 136.144 millones, "Otras reservas" con 6.643 millones, "Préstamos recibidos externos" con 259 millones y "Reservas por regularización" con 2.206 millones.

En el subgrupo de "Reservas" un 29% de las Mutuas no han remitido la documentación preceptiva sobre las dotaciones, aplicaciones y regularizaciones que se han practicado en dicha rúbrica, lo que constituye una limitación para el seguimiento y control de la misma. No obstante, de las comprobaciones efectuadas se deduce que en un 39% de las Entidades existen diferencias entre las dotaciones realizadas y las que deberían haberse llevado a cabo conforme a la normativa aplicable. A este respecto hay que señalar que en la "Reserva para obligaciones inmediatas", que asciende a 34.054 millones de pesetas, un 20% de Mutuas han efectuado dotaciones partiendo de unas cifras de reaseguro que no coinciden con las que figuran en la cuenta de liquidación del presupuesto, sin que se hayan justificado las diferencias. De otra parte y también por lo que se refiere a esta "Reserva para obligaciones inmediatas", hay que reseñar que algunas Mutuas ("Previsión-Equidad", "Castellana", "Pakea", "Musap") han dado de baja de esta reserva de carácter finalista los importes que rebasaban la cobertura mínima legalmente establecida y han aplicado dichas bajas a incrementar reservas de carácter voluntario (Fondo especial de excedentes). Estas actuaciones se amparan en el vacío legal existente en este punto.

El "Fondo de prevención y rehabilitación", con un saldo de 16.763 millones de pesetas, que debe dotarse con el 80% de los excedentes de gestión de las Mutuas después de cubiertas las reservas obligatorias, figura formalizado contablemente en estas Entidades de forma parcial, ya que en el mismo se recogen solamente, de una parte, las dotaciones del ejercicio pendientes de ingreso en la cuenta abierta en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, y de otra, el importe que cubre la financiación de las inversiones realizadas en inmovilizaciones afectas a los fines del Fondo. El resto de éste, que constituye su mayor parte, figura en el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Como ya se puso de manifiesto en el análisis de las reservas de dicho Servicio Común, este desglose contable se considera inadecuado a la naturaleza de las operaciones que comprende el Fondo, que constituye una reserva de las Mutuas, con independencia de su grado de disponibilidad y de la formalización contable por la Tesorería General de la Seguridad Social de los depósitos bancarios efectuados a su nombre en el Banco de España.

No se aceptan las alegaciones. El Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo en la gestión de la Seguridad Social, regula, entre otros aspectos, la constitución del Fondo de prevención y rehabilitación, configurando éste como una reserva de las Mutuas, hoy denominadas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. No modifica la titularidad de la citada reserva el hecho de que, de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial de 2 de junio de 1980, se ingresen en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social parte de los excedentes de las Mutuas, hasta tanto se aprueba, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, su aplicación por las Mutuas a los fines de prevención y rehabilitación legalmente establecidos.

Del análisis de la documentación relativa al Fondo, se observa una carencia generalizada de inventarios que permitan un seguimiento de su gestión. En cuanto a las fluctuaciones de los saldos que figuran en las Mutuas y los correlativos movimientos en el Fondo de la Tesorería General, se observa en términos generales una concordancia de datos, si bien existen excepciones, como alguna duplicidad en la contabilización (Mutua "Felanigense"), formalización inadecuada de inversiones del Fondo (Mutua "Museba") o formalización por importe superior al saldo de la cuenta ("Mutua de Ceuta").

En "Otras reservas" la cuenta "Reserva de autoseguro", con un saldo de 957 millones de pesetas, integrado por el de veintiuna Mutuas de las que la mitad no han aportado inventario, se nutre con cargo al presupuesto de gastos corrientes para atender la cobertura de prestaciones de previsión social a favor del personal, complementarias e independientes de las de la Seguridad Social, lo que no se considera procedente, habida cuenta que se están aplicando fondos públicos para tal finalidad.

En el subgrupo "Préstamos recibidos externos", la cuenta "Préstamos recibidos", cuyo saldo corresponde a tres Mutuas ("Hoste", "Mupag" y "Mutua Rural"), carece de información que permita conocer su origen, composición y evolución.

Inmovilizado

Este grupo asciende a 33.604 millones de pesetas de valor neto, de los que corresponden a inmovilizaciones materiales 26.964 millones y a inmovilizaciones financieras 6.640 millones.

En general la documentación justificativa de tales saldos presenta deficiencias de distinta naturaleza: faltan inventarios en un 63% de los saldos y los recibidos carecen, en muchos casos, de los datos imprescindibles para la identificación de los bienes (faltan fechas del origen de operaciones, figuran conceptos indeterminados, no constan los centros de ubicación, etc.).

Por lo que se refiere al inmovilizado material, algunas Mutuas no han practicado amortizaciones en rúbricas en las que sería procedente. Tal es el caso de la "Mutua Panadera de Cataluña" con un inmueble adquirido en 1975 valorado en 157,6 millones de pesetas.

En la cuenta "Participación en centros mancomunados", representativa de las inversiones financiadas por el Fondo de prevención y rehabilitación, el saldo global ha disminuido en 1990 en 234 millones de pesetas, como consecuencia principalmente de las bajas producidas en las Mutuas "Asepeyo" y "Mutua General" por 98 y 137 millones, respectivamente, sin que se haya podido verificar el incremento que subsiguientemente debería haber experimentado el referido Fondo. En las cuentas "Fianzas constituidas" y "Depósitos constituidos" no existe uniformidad de criterio en la imputación de conceptos, que se formalizan indistintamente en ambas rúbricas. Por otra parte, las variaciones de sus saldos, respecto de la situación del ejercicio anterior, no han tenido en todos los casos el pertinente reflejo en la cuenta de operaciones de capital.

Existencias

La cuenta "Aprovisionamientos y suministros" presenta un saldo de 806 millones de pesetas, que en muchos casos tampoco está adecuadamente documentado (carencia de inventarios o defectos sustanciales en los mismos en cuanto a indeterminación de los bienes, falta de fechas origen, etc.)

Acreedores y deudores

El subgrupo de "Proveedores" registra un saldo global de 918 millones de pesetas y el de "Acreedores" de 15.464 millones. En ambos casos no existen inventarios completos de las partidas que los integran, estimándose en más del 50% las Mutuas que carecen de los mismos. De otra parte, en los recibidos se observan múltiples incidencias, entre las que destaca la falta de uniformidad en el tratamiento de operaciones de la misma naturaleza relativas a acreedores.

Asimismo, es destacable la inclusión en los referidos subgrupos y en el de "Ajustes por periodificación", de saldos de obligaciones contraídas por operaciones presupuestarias, lo que supone una indeterminación de las mismas en la contabilidad de las Mutuas, así como una falta de homogeneidad en su formalización en relación con la que se sigue en las restantes Entidades del Sistema, con la consiguiente repercusión en la representatividad de los balances agregados y consolidados.

Por lo que respecta a "Deudores", con un saldo de 7.387 millones de pesetas, hay que reiterar la carencia de inventarios en muchas Mutuas y el insuficiente contenido de los que se han aportado (omisión de fecha origen, partidas contrarias a la naturaleza del saldo de la cuenta, inventarios no conciliados con saldo contable, falta de homogeneidad en la imputación de conceptos a las distintas cuentas, etc.).

Cuentas financieras

Comprende las cuentas de "Tesorería" con un saldo de 30.753 millones de pesetas, "Deudores por operaciones financieras" con 332 millones, "Fianzas y depósitos recibidos" con 53 millones, "Inversiones financieras" con 75.842 millones, "Cuentas diversas" con 18.324 millones en el activo y 704 en el pasivo, "Anticipos de tesorería internos del Sistema de la Seguridad Social" con 21 millones y "Ajustes por periodificación" con 599 millones en el activo y 1.447 en el pasivo.

Las cuentas de "Tesorería" no se han documentado con las certificaciones de saldos bancarios y arqueos de caja, a excepción de la "Mutua Museba". Con independencia de esto, algunos saldos de los balances figuran con signo acreedor o por importes diferentes de los que constan como existencias en los respectivos anexos de tesorería.

En "Deudores por operaciones financieras" faltan inventarios, fechas origen de las operaciones y desgloses de las partidas que integran los saldos.

"Fianzas y depósitos recibidos", que registra saldo en nueve Mutuas, adolece también de carencia de inventarios. Los que se han recibido representan tan sólo un 1,4% del saldo.

En "Inversiones financieras" algunas Mutuas han formalizado contablemente la adquisición de valores emitidos al descuento por el valor nominal o de reembolso, en lugar de por el coste. En la documentación justificativa de los saldos se observan carencias similares a las señaladas respecto de deudores por operaciones financieras y en algún caso se han recibido inventarios que no se corresponden con los datos del balance.

En "Cuentas diversas" el componente principal lo constituye la cuenta de relación con la Tesorería General de la Seguridad Social, con 12.268 millones de pesetas de saldo deudor neto, que difiere del que registra este Servicio Común en 76 millones, cifra que es el resultado de diversas diferencias de uno y otro signo de las cuentas de relación con distintas Mutuas. Las restantes cuentas que integran este subgrupo presentan las deficiencias de documentación ya reiteradas sobre carencia de inventarios y calidad de los aportados.

Respecto del subgrupo de "Anticipos de tesorería internos del Sistema de la Seguridad Social", no existe información sobre las operaciones que se incluyen en el mismo.

En "Ajustes por periodificación" se producen las repetidas deficiencias acerca de la justificación de saldos.

Resultados acumulados

Este subgrupo que presenta un saldo de 394 millones de pesetas en el activo y 336 millones en el pasivo, incluye resultados de ejercicios anteriores, procedentes en gran parte, de ajustes de auditoría no regularizados a 31.12.1990. No se ha recogido en esta rúbrica el déficit de gestión no financiado del ejercicio, por importe de 36 millones de pesetas, ni se facilita información sobre las rúbricas donde se formaliza.

Cuentas de orden

Este grupo presenta un saldo de 79.350 millones de pesetas distribuido en diversas cuentas de estructura heterogénea, con excepción de las relativas al patrimonio propio y a la fianza reglamentaria, que son de común aplicación en todas las Mutuas.

En términos generales estas cuentas no están documentadas con inventarios que justifiquen los saldos, y, en el caso del patrimonio mutual, se aporta un balance como justificación del saldo, que en un 15% de las Mutuas no coincide con el importe que figura en cuentas de orden y que tampoco está documentado con inventarios.

II.5.2.- RESULTADOS DE LA GESTION

En el ejercicio 1990 las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales han formalizado gastos por un total de 270.466 millones de pesetas e ingresos por 291.003 millones, de donde se deduce un resultado de gestión positivo de 20.537 millones de pesetas, cifra que procede de un resultado por operaciones presupuestarias de 20.221 millones de pesetas, y de un resultado por operaciones extrapresupuestarias de 316 millones. Sin embargo, las cifras que refleja la cuenta de gestión agregada elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, arrojan un resultado de gestión positivo por importe de 20.414 millones de pesetas, de los que 20.364 proceden de operaciones presupuestarias y 50 de extrapresupuestarias. La comparación entre unos datos y otros se expone a continuación:

Componentes/Resultados	Mutuas	Mª de Trabajo y S.S.	Diferencia
Ingresos presupuestarios	290.665.702.177	290.878.024.275	(212.322.098)
Ingresos extrapresupuestarios	337.864.476	125.542.378	212.322.098
Total ingresos	291.003.566.653	291.003.566.653	--
Gastos presupuestarios	270.444.407.424	270.513.700.964	(69.293.540)
Gastos extrapresupuestarios	21.820.153	75.716.372	(53.896.219)
Total gastos	270.466.227.577	270.589.417.336	(123.189.759)
Resultado por operac.presup.	20.221.294.753	20.364.323.311	(143.028.558)
Resultado por operac. extrap.	316.044.323	49.826.006	266.218.317
Resultado de gestión	20.537.339.076	20.414.149.317	123.189.759

La diferencia neta entre las dos cuentas de gestión, que alcanza la cifra de 123 millones de pesetas, se debe a gastos de asistencia social de las Mutuas "MAPFRE" (122,5 millones) y "Cyclops" (0,7 millones) que figuran en las cuentas de liquidación del presupuesto y no en la cuenta de gestión.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, elabora la cuenta de gestión agregada a partir de la cuenta de liquidación del presupuesto, en lugar de integrar las cuentas de gestión presentadas por las Mutuas. Por este motivo las diferencias por gastos de asistencia social no se producen en la cuenta de gestión remitida por el Departamento.

No se aceptan las alegaciones. En el Anteproyecto de Informe Anual se señalan las diferencias entre la cuenta de gestión agregada de Mutuas presentada por el Ministerio y la que se obtiene de la acumulación de las cuentas de gestión elaboradas por las Mutuas, no, entre la cuenta de liquidación del presupuesto y la de gestión como se dice en alegaciones. Por otra parte, los estados agregados deben ser el resultado de la acumulación de los estados contables que rinden las Mutuas, y el objetivo a perseguir es precisamente la bondad de dichos estados contables, aplicando al efecto los mecanismos de seguimiento y control necesarios.

El detalle de ingresos y gastos, y su comparación, se reflejan en el Anexo 18.

II.5.2.1.- Resultados por operaciones presupuestarias

La cuenta de gestión agregada de Mutuas que presenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social da lugar a un resultado del ejercicio por operaciones presupuestarias de 20.364 millones de superávit, consecuencia de la formalización de gastos por 270.514 millones e ingresos por 290.878. Este resultado es coincidente con el que se deduce de la comparación de obligaciones contraídas e ingresos realizados en la cuenta de liquidación del presupuesto por operaciones corrientes, también presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, no es coincidente con el que se obtiene al comparar rúbricas presupuestarias que recogen el excedente corriente en la cuenta de liquidación del presupuesto. El resultado que se obtiene por este procedimiento (por importe de 20.414 millones) difiere en 50 millones del presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al haber incluido éste el resultado por operaciones extrapresupuestarias en el art. 51 de la liquidación del presupuesto (excedente corriente).
Por otra parte, al elaborar la cuenta de gestión agregada de las Mutuas partiendo de las cuentas de gestión rendidas por cada una de estas Entidades, se produce un gran número de diferencias con la presentada por el Departamento. El resultado de gestión por operaciones presupuestarias que se obtiene del agregado de las cuentas de gestión presentadas por las Mutuas asciende a 20.221 millones, que es inferior en 143 millones a las cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Esta diferencia se desglosa en 212 millones de pesetas en ingresos y 69 millones en gastos, que a su vez son el neto de 123 millones que formaliza el Departamento como gastos omitidos por las Mutuas y de 54 millones que considera gastos extrapresupuestarios, a los que las Mutuas no han dado tal carácter en sus cuentas de gestión. Por otra parte existen múltiples diferencias, que se compensan entre sí, en los diferentes conceptos de gastos, entre la información facilitada por las Mutuas y la elaborada por el Departamento, que son consecuencia de los distintos criterios de imputación de las operaciones presupuestarias a la cuenta de gestión.

Además de las incidencias señaladas, las dotaciones a reservas que figuran en la cuenta de gestión agregada de Mutuas elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentan diferencias, que se compensan entre sí, con la cuenta de gestión que se obtiene agregando las rendidas por cada una de estas Entidades. Esto es consecuencia de errores materiales al tomar los datos de las Mutuas "Maestros Pintores" e "Ibesvico".

En cualquier caso, la cuenta de gestión agregada de Mutuas que presenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha obtenido a partir de la cuenta de liquidación del presupuesto en lugar de ser el resultado de la agregación de las cuentas de gestión que le sirven de soporte.

Con independencia de lo anterior, hay que señalar que el límite de gastos de administración que en función de los ingresos establece la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 2.10.1985, ha sido rebasado en veinte Mutuas. El exceso de este tipo de gastos que supone una imputación indebida al presupuesto de la Seguridad Social ha sido justificado por cinco de ellas con aplicación al Fondo especial de excedentes o al patrimonio mutual y una Mutua aclara que el exceso proviene de ajustes de auditoría. Las catorce restantes no justifican ni aclaran el exceso de gastos.

II.5.2.2.- Resultados por operaciones extrapresupuestarias

El resultado por operaciones extrapresupuestarias que refleja la cuenta de gestión elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social asciende a 50 millones de superávit y el que se deduce de la agregación de las cuentas de gestión que elaboran las Mutuas a 316 millones, también de signo positivo.

La diferencia de 266 millones de pesetas se debe a que el Ministerio imputa 212 millones menos que las Mutuas en ingresos extrapresupuestarios, a los que ya se ha hecho mención en el epígrafe anterior, y a la inclusión de 54 millones como gastos extrapresupuestarios localizados fundamentalmente en la "Mutua Panadera de Cataluña", que ésta formaliza como gastos de asistencia sanitaria.

Estas diferencias, así como las mencionadas en apartados precedentes, obedecen a las mismas causas de falta de homogeneidad en el tratamiento de operaciones entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las Mutuas, o bien a rectificaciones que aquél introduce directamente en sus estados agregados sin reflejo previo en las cuentas rendidas por las propias Mutuas en su calidad de cuentadantes.

II.5.3.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto inicial del ejercicio 1990 del conjunto de Mutuas, ascendió a 302.057 millones de pesetas, según la información facilitada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recogida

en Anexos 13 y 14. Esta cifra representa el 4,55% del total agregado del Sistema de la Seguridad Social como se detalla en Anexo 15. De dicho importe corresponden 266.314 millones a operaciones corrientes y 35.743 a operaciones de capital. En todos los datos que anteceden existe equilibrio entre el presupuesto de recursos y el de gastos. Sin embargo estas cifras difieren del agregado de la documentación facilitada por las Mutuas en las áreas de ingresos y gastos, por lo cual en este caso no se produce el equilibrio inicial al que se ha hecho referencia anteriormente, existiendo una diferencia neta de 203,5 millones de pesetas, según Anexo 16, localizada en las siguientes Mutuas:

Mutua	Diferencia Ppto. inicial (Ingresos-gastos)
Leridana	36,5
Asociación Mutual Layetana	250,3
La Providencia	8,8
Guanarteme	0,1
Madrileña de Taxis	(0,2)
Mutua Santa Marta	(91,8)
Caja Navarra de Accidentes	(0,2)
TOTAL	203,5

En el cuadro que antecede destacan la diferencia de la "Asociación Mutual Layetana", que consigna en su presupuesto inicial cotizaciones sociales que superan en 250,3 millones de pesetas a las que figuran en el del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la diferencia que figura en la "Mutua Santa Marta", que recoge menor importe que dicho Departamento en aplicaciones de tesorería.

Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, su valor inicial se incrementó en 83.931 millones de pesetas, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en 84.483 según las cuentas de liquidación del presupuesto de las Mutuas. Esta última cifra de modificaciones supone un incremento del 27,97% del presupuesto inicial, localizándose fundamentalmente en los capítulos de "Transferencias corrientes" y "Activos financieros". En las mismas se comprenden 6.652 millones de pesetas que se derivan de las modificaciones producidas en el concepto "Excedentes de gestión de Mutuas" del presupuesto de gastos, resultando por tanto un importe neto de 77.279 millones relativo a 88 Mutuas, cuya justificación es muy incompleta. Se ha recibido documentación de tan sólo el 4,64% de dicho importe, correspondiente a 39 expedientes de 15 Mutuas, documentación que, en algunos casos, adolece de carencias relativas a partes sustantivas de los mismos.

En el análisis de la información aportada se observa, que los expedientes de ampliaciones de crédito figuran con fecha del mes de junio de 1991, prácticamente seis meses después del cierre del ejercicio, lo que pone de manifiesto la realización de gastos sin cobertura presupuestaria y una tramitación extemporánea y por consiguiente irregular de las modificaciones presupuestarias, contraviniendo la normativa reguladora de las mismas.

No se aceptan las alegaciones. En el Anteproyecto de Informe Anual no se hace referencia al procedimiento ni el organo competente, sino a las fechas de tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias. Es incuestionable que estas modificaciones deben llevarse a cabo con carácter previo a la realización del gasto y ello con independencia de que la contabilidad permanezca abierta con posterioridad a la conclusión del ejercicio natural para registrar los hechos económicos.

En cuanto a los expedientes de transferencias de crédito, hay que señalar que la documentación recibida que se refiere a 17 expedientes de 8 Mutuas por importe de 106 millones de pesetas, es asimismo incompleta.

En materia de ejecución del presupuesto, los recursos realizados ascendieron, según los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 348.001 millones de pesetas, mientras que de la agregación de las cuentas de liquidación rendidas por las Mutuas se obtiene una cifra de 346.661 millones, lo que supone unos porcentajes de realización del 115,21% y 114,69%, respectivamente. La diferencia neta de 1.340 millones se debe a ajustes practicados por el Departamento en aplicaciones de tesorería para financiar déficit corriente (1.466 millones) y en aplicaciones de tesorería para financiar operaciones de capital (126 millones). En el área de los gastos las obligaciones reconocidas se elevaron a 348.043 millones, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a 346.258 millones según el agregado de las cuentas de las Mutuas, significando unos porcentajes de realización sobre el presupuesto total del 90,17% y 89,58% respectivamente. La diferencia neta entre ambos datos, que asciende a 1.785 millones, también se debe a ajustes realizados por el Departamento, de los que 1.778 corresponden a operaciones corrientes en concepto de excedente corriente y 7 a operaciones de capital relativas a la cartera de valores.

Comparando los presupuestos de recursos y de gastos, por lo que se refiere a recursos realizados y a obligaciones reconocidas, (v. Anexo 16), se observa que existe un desequilibrio de realización que, en los estados que presenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social alcanza la cifra de 42 millones de pesetas, importe que procede de las siguientes causas:

	Importe
. Resultados por operaciones extrapresupuestarias incluido en presupuesto de gastos (art.51)	50
. Déficit de gestión no financiado con aplicación de reservas	36
. Obtención de tesorería por operaciones de capital	(44)
TOTAL	42

Sin embargo si se lleva a cabo esta misma comprobación con la documentación facilitada por las Mutuas, el desequilibrio asciende a 403 millones netos de exceso de recursos realizados sobre obligaciones reconocidas, que proceden de 35 Mutuas de las 95 existentes.

Por lo que respecta a las operaciones de capital, no se da la correspondencia que debiera existir entre las obligaciones reconocidas y recursos realizados (una vez deducido el artículo 88 del presupuesto de ingresos "Aplicaciones de tesorería para financiar operaciones de capital") y las operaciones presupuestarias de la cuenta de capital. Las diferencias que resultan de los datos que facilita el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, detallados en Anexo 17, difieren de las que se derivan de la documentación que rinden las Mutuas, según el siguiente resumen:

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Millones de pesetas
- Cuenta de capital (Operaciones presupuestarias del Debe)	47.255
- Obligaciones reconocidas por operaciones de capital	45.492
Diferencia	1.763
- Cuenta de capital (Operaciones presupuestarias del Haber)	34.307
- Recursos realizados por operaciones de capital	32.558
Diferencia	1.749

(Las diferencias proceden, básicamente, de inversiones financieras.)

Mutuas de A.T.y E.P.	Millones de pesetas
- Cuenta de capital (Operaciones presupuestarias del Debe)	49.071
- Obligaciones reconocidas por operaciones de capital	45.485
Diferencia	3.586
- Cuenta de capital (Operaciones presupuestarias del Haber)	35.768
- Recursos realizados por operaciones de capital	32.551
Diferencia	3.217

Los datos que anteceden ponen de manifiesto que ninguna de las dos versiones de la cuenta de capital se corresponde con las liquidaciones de presupuesto, habiéndose recogido en todos los casos importes superiores en aquéllas respecto de éstas. Asimismo, las operaciones presupuestarias de la cuenta de capital, según los datos de las Mutuas, superan a las recogidas por el Departamento en 1.816 millones de pesetas en saldos del Debe y en 1.461 millones en saldos del Haber de dicha cuenta de capital, procediendo la mayor parte de las diferencias de operaciones de inversiones financieras de la Mutua de Accidentes de Zaragoza.

No se aceptan las alegaciones. Como ya se ha manifestado, los estados agregados no rectifican los estados contables rendidos por las Mutuas, ni es tal su cometido. La representación fiel de los hechos económicos en las cuentas rendidas por las Entidades debe ser objetivo a alcanzar con independencia del proceso de agregación de las mismas.

II.6.- EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN TRAMITADOS POR LA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Se han recibido y examinado 443 expedientes relativos al ejercicio 1990, por importe de 20.051 millones de pesetas de saldos deudores y 14.747 millones de saldos acreedores.

El resultado del análisis, que se puso en conocimiento de la Comisión con fecha 25.11.1991, responde al siguiente resumen:

Expedientes 1990	Nº.	Importes (Millones pesetas)	
		Deudores	Acreedores
Expedientes susceptibles de regularización por operaciones corrientes	271	317	5.569
Expedientes susceptibles de regularización previa aplicación presupuestaria	41	1.586	60[3]
Expedientes que afectan a operaciones de capital	5	5	4
Expedientes con documentación o actuaciones insuficientes	126	18.143	9.114
TOTAL	443	20.051	14.747

De acuerdo con los criterios expuestos en el "Dictamen del Tribunal sobre el informe emitido por la Comisión para el estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social presentado a este Tribunal el 3 de junio de 1991" (BOE 29.5.1992), de los 126 expedientes con documentación o actuaciones insuficientes, cinco expedientes por importes deudores de 0,092 millones de pesetas y acreedores de 0,5 millones corresponden a la clasificación de "sin documentar por causas ajenas a las Entidades" (riadas, incendios etc.) y cincuenta y cuatro expedientes por importe de 9.646 millones de signo deudor y 6.218 millones de signo acreedor, se refieren a partidas con origen anterior a 31 de diciembre de 1980, cuya antigüedad podría originar la ineficacia de los procesos investigadores aplicables para llevar a cabo una adecuada documentación de los expedientes.

Por otra parte la totalidad de los expedientes tramitados por la Comisión para el estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social desde el comienzo de sus actuaciones y recibidos en este Tribunal hasta la fecha, se clasifican a continuación:

[3] Este importe se refiere a un expediente que minora otro del ejercicio 1988 de signo deudor.

Ejercicio	Número de expedientes	Importes (Millones de pesetas)	
		Deudores	Acreedores
1985	261	888	918
1986	410	982	901
1987	322	14.999	8.892
1988	547	39.126	23.435
1989	815	22.470	9.571
1990	443	20.051	14.747
TOTAL	2.798	98.516	58.464

Entidades	Número de expedientes	Importes (Millones de pesetas)	
		Deudores	Acreedores
INSS	1.487	31.091	21.202
INSALUD	439	39.415	1.600
INSERSO	399	230	674
I.S.M.	34	2.117	1.381
Tesorería General	439	25.663	33.607
TOTAL	2.798	98.516	58.464

Con el examen de los expedientes del ejercicio 1990 a que se ha hecho referencia anteriormente se han completado los análisis, cuyos resultados globales se exponen a continuación, significando que se han tenido en cuenta los criterios expuestos en el Dictamen a que se ha hecho referencia:

- Expedientes susceptibles de regularización definitiva. Se encuentran en esta situación un total de 1.882 expedientes por importe de 32.600 millones de pesetas de signo deudor y 30.587 millones de signo acreedor.

- Expedientes susceptibles de regularización definitiva, previa aplicación presupuestaria. Los expedientes afectados en número de 572 suponen gastos realizados por importe de 52.807 millones de pesetas.

- Expedientes que afectan a operaciones de capital. Estos expedientes, que en número de 88 representan saldos deudores por importe de 137 millones de pesetas y acreedores por 38 millones, son susceptibles de regularización definitiva, previos los análisis particulares que determinen su incorporación o baja en la contabilidad patrimonial de las Entidades gestoras afectadas o de la Tesorería General.

- Expedientes que, en todo caso, requieren actuaciones complementarias conducentes a completar la documentación acreditativa de las operaciones sometidas a depuración. En esta situación se encuentran un total de 256 expedientes por importe de 12.914 y 27.779 millones de pesetas de signo deudor y acreedor, respectivamente.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de la Comisión Mixta, se han llevado a cabo por la Seguridad Social una serie de actuaciones complementarias, algunas de ellas durante el trámite de alegaciones, que han permitido subsanar las carencias de documentación advertidas, reclasificar determinados expedientes relativos a operaciones de capital y por último incluir como gastos sin cobertura presupuestaria algunas partidas sometidas a depuración cuya naturaleza se ha conocido a través de los datos complementarios aportados. Permanecen pendientes las siguientes actuaciones:

- *Expedientes que precisan cobertura presupuestaria para su regularización definitiva. Corresponden a gastos por un valor de 56.881 millones de pesetas.*

- *Expedientes que afectan a operaciones de capital. Falta la formalización contable de la incorporación al patrimonio de la Seguridad Social de las operaciones que ya se han definido como tales y que ascienden a 105 millones de pesetas de signo deudor y 45 millones de signo acreedor.*

III. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

III.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

De acuerdo con lo establecido por el artículo 6 de la Ley de Contratos del Estado (LCE), cuyo texto articulado fue aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril, así como por los artículos 11 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu) y 39 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu) se ha realizado el examen de quinientos veinte contratos, celebrados dentro del Sistema de la Seguridad Social durante el ejercicio de 1990, por un importe global de 74.824.972.979 pesetas.

Estos contratos aparecen desglosados en los anexos 19 al 23 de este informe, según su naturaleza, la entidad contratante y la modalidad en que fueron adjudicados.

Asimismo, y para mejor cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.1 de la LFTCu., se ha llevado a cabo la fiscalización de ciento setenta y ocho contratos cuya fase de ejecución, modificación o extinción tuvo lugar durante 1990, aunque fueron adjudicados en ejercicios anteriores.

III.1.1.- REMISIÓN DE LOS CONTRATOS AL TRIBUNAL

Las normas anteriormente citadas establecen la obligación de los organismos de remitir, por un lado y de manera genérica, aquellos contratos cuyo importe sea superior a veinticinco millones de pesetas, y por otro, una relación anual de los contratos a los que se refiere el artículo 39 de la LFTCu, acompañada de copias autorizadas de los respectivos documentos de formalización y de aquellos otros que acrediten su cumplimiento o extinción, sin perjuicio de remitir al Tribunal cualesquiera otros que éste les requiera, según se señala en el artículo 40.2.

El Tribunal de Cuentas, para garantizar que la fiscalización se realiza sobre la totalidad de estos contratos, utiliza como medios auxiliares a los legalmente establecidos, tanto la información que proporciona el "Boletín Oficial del Estado" ("BOE") en cuanto a convocatoria y adjudicaciones de contratos se refiere, como el examen y cotejo del registro de contratos existente en la Tesorería General de la Seguridad Social, que en soporte informático ha sido facilitado al Tribunal.

Estas fuentes de conocimiento auxiliares, ninguna de ellas por sí sola exhaustiva, han permitido aumentar la fiscalización el 16%, respecto de los cuatrocientos cincuenta expedientes de contratación administrativa inicialmente remitidos al Tribunal y también explican en parte el incremento de las fiscalizaciones respecto de 1989, (año en el que se observó un bajo nivel de contrataciones): incremento que se cifra en un 60% en el número de contratos y en un 62% en el volumen de contratación (anexos 23 y 24).

Las entidades vienen remitiendo las relaciones de los contratos que legalmente deben ser relacionados. Sin embargo estas relaciones no son completas. Además contienen otros contratos que no reúnen las condiciones legales para su inclusión.

Los organismos emisores de los contratos y de las relaciones son las Direcciones Generales de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), del Instituto Social de la Marina (ISM) y del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). En este último Instituto las delegaciones efectuadas de la facultad de contratar ocasionan que numerosos contratos se reciban a través de sus Direcciones Territoriales y Provinciales.

III.1.2.- DATOS GLOBALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

El resultado global de los quinientos veinte contratos fiscalizados se presenta en forma de cuadros que se recogen en los anexos.

Hay un cuadro para cada tipo de contrato: de obras (anexo 19), de servicios (anexo 20) y de suministros (anexo 21), en donde se detalla el número de contratos adjudicados y el importe de la contratación, así como los porcentajes que uno y otro representan, todo ello agrupado por entidades contratantes y según las distintas modalidades de adjudicación.

El anexo 22 es un resumen que permite apreciar qué porcentajes respecto del número de contratos y del importe de contratación representan los distintos tipos de contratos, en cada una de las entidades y en el total del Sistema.

Para facilitar una visión de conjunto también se incluye un cuadro resumen general de la contratación administrativa en el área de la Seguridad Social (anexo 23), en donde se reflejan todos los datos recogidos en los cuadros anteriores.

El anexo 24 recoge los datos básicos de la fiscalización de los contratos correspondientes a 1989. La inserción de este cuadro completa, en un aspecto dinámico, la visión que facilita el anterior.

El análisis que se inicia a continuación destaca para cada tipo de contratos los datos ya recogidos en los anexos que se estiman más significativos.

Por último, es interesante dar a conocer las causas legales que han motivado la fiscalización. Ciento treinta y dos contratos han sido fiscalizados por la causa genérica de tener un presupuesto de ejecución superior a 25 millones de pesetas (art. 6 LCE). Trescientos veintiún contratos han sido acreedores de fiscalización particular al reunir las características legalmente establecidas en cuanto a naturaleza, importe y sistema de adjudicación (art. 39.1, 1ª- 4ª LFTCu). Los restantes sesenta y siete expedientes, de importe inferior a 25 millones de pesetas, han sido fiscalizados por referirse a proyectos reformados o complementarios, o por tratarse de suministros específicos para instalaciones ya existentes, cuyos contratos se fiscalizaron en su momento (art. 39.1, 5ª y 6ª LFTCu).

III.2.- CONTRATOS DE OBRAS

Los contratos de obras constituyen el tipo más importante de los examinados, por cuanto representan el 45% del número de contratos y con 43.932 millones de pesetas, el 59% del importe de la contratación. Este tipo es también el único que se ha incrementado respecto de 1989, hasta valores que representan el 217% en el número de contratos y el 386% en el importe de contratación, es decir, prácticamente se ha cuadruplicado la inversión realizada en el Sistema de la Seguridad Social.

III.2.1.- CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE CONCURRENCIA GENERAL

Durante el ejercicio considerado se ha producido una importante novedad introducida por el artículo 14 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Esta

disposición, que entró en vigor a mediados del ejercicio, determina que la subasta deje de ser la forma ordinaria para la adjudicación de las obras. En efecto, el concurso queda equiparado como procedimiento ordinario de adjudicación a la subasta y constituye la modalidad para la selección del contratista cuando ésta no se haya de efectuar exclusivamente en atención a la oferta económica más ventajosa.

La consecuencia de esta medida ha sido un aumento importante de los contratos adjudicados por concurso. Destaca en este sentido el INSALUD en donde se ha adjudicado por concurso el 739% del importe adjudicado el pasado año por la misma modalidad.

Adjudicaciones mediante subasta

La subasta, como se ha dicho, deja de ser la forma general de adjudicar las obras. No obstante, la Tesorería mantiene la subasta como la modalidad de adjudicación más habitual, recurriendo sólo en una ocasión al concurso. Más aún, el INSS y el ISM utilizaron únicamente la subasta como forma de garantizar la libre concurrencia.

La subasta supuso el 44% del número de contratos de obras pero sólo el 27% de su importe.

Adjudicaciones mediante concurso

El concurso ha sido la forma en que se ha alcanzado un volumen mayor de contratación. Destaca en este sentido el INSALUD, en donde el importe de lo contratado mediante esta modalidad representa el 1.400% de lo contratado por subasta.

La fiscalización de estos contratos ha puesto de manifiesto la mayor complejidad de esta forma de adjudicación, por lo que se hace necesario prestar especial atención a las causas que conducen a la adjudicación y a la manera en que los concursos fueron resueltos. Asimismo es de destacar que el informe que emite la unidad competente, sobre los aspectos técnicos de las ofertas, resulta en general determinante de la adjudicación. Frecuentemente estos informes valoran aspectos tales como controles de calidad suplementarios o la reducción en los plazos de ejecución. En este último aspecto hay que advertir, porque ha podido ser un factor importante para la adjudicación, el reiterado incumplimiento de los plazos de ejecución.

III.2.2.- CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

La adjudicación directa, al no garantizar la libre concurrencia es una forma excepcional de llevar a cabo la selección del contratista. Sólo resulta admisible en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la LCE. La modificación introducida por el artículo 14 de la Ley de Presupuestos para 1990, en el supuesto de cuantía, en el sentido de fijar en cincuenta millones el límite hasta el cual poder acordar esta modalidad, facilita acudir a la adjudicación directa con mayor frecuencia.

Teniendo en cuenta que esta modificación sólo ha estado vigente en la segunda mitad del ejercicio, el aumento del número de veces que se ha recurrido a esta forma de adjudicación ha sido relativamente importante, si bien, como es lógico, el aumento del importe de la inversión fue moderado. En efecto, mientras que en 1989 los contratos adjudicados directamente representaron el 13% del número total y el 11% del volumen de contratación, en 1990 han representado el 30% y el 14%, respectivamente.

Hay que hacer notar que en las adjudicaciones directas debidas a causa legal distinta a la cuantía, ésa no siempre queda perfectamente establecida y en ocasiones la documentación que aportan las entidades es insuficiente.

III.2.3.- EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Se han examinado cincuenta y un contratos adjudicados durante 1989 o en años anteriores y que ya estaban por tanto fiscalizados en las fases de preparación, perfección y adjudicación, formalización y afianzamiento, pero en los que su ejecución, modificación o extinción se ha llevado a cabo durante el ejercicio de 1990.

En estos contratos han sido frecuentes los retrasos en la terminación de la obra, que principalmente derivan desde el inicio mismo ante la falta de las correspondientes licencias. También se producen retrasos ocasionados por reformas o modificaciones en las que, una gran parte, se aprueban con posterioridad a la fecha fijada para la terminación de la obra, incluso después de la que resulta tras haberse autorizado una o más ampliaciones del plazo de ejecución.

Las recepciones provisionales suelen producirse con retraso que llega a ser de nueve meses o más en algunos casos.

III.3.- CONTRATOS DE SERVICIOS

Los contratos de servicios han supuesto el 30% del número de los examinados y con 17.814 millones de pesetas el 24% del importe total contratado. Si bien los contratos de esta naturaleza que han sido fiscalizados han aumentado respecto de 1989 (debido al mayor número de contratos de limpieza, mantenimiento y vigilancia de edificios), el volumen contratado ha disminuido.
La reducción del importe ha sido especialmente significativa en los concursos celebrados por la Tesorería. Por el contrario, en el INSERSO ha aumentado su importe debido a la adjudicación del concurso relativo al programa de vacaciones, que ascendió a 4.821 millones de pesetas, lo que supuso el 90% del volumen de servicios contratados por esta Entidad Gestora.

III.3.1.- CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS MEDIANTE CONCURSO

El concurso ha sido la forma de adjudicación en donde se ha producido la mayor disminución del volumen de contratación, debido como se ha dicho a la Tesorería, que acude a esta modalidad cuando el servicio que se contrata no precisa para su ejecución de una cualificación técnica específica, ni la utilización de sistemas o métodos sofisticados.

III.3.2.- CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

El importe de la contratación de servicios por adjudicación directa durante 1990 ha aumentado, respecto de 1989, en un 28%, a pesar de la apuntada disminución en el volumen total de contratación de servicios. Este aumento tiene su explicación en la mayor frecuencia con la que la Tesorería, Servicio Común al que está adscrita la Gerencia de Informática, ha acudido a esta modalidad de adjudicación (el 74% de los contratos de servicios de la entidad han sido adjudicados directamente).

La naturaleza de los contratos de asistencia técnica para el mantenimiento, desarrollo y soporte de los equipos informáticos y de sus programas, así como para la formación del personal, ha aconsejado la adjudicación a los propios proveedores o suministradores de los correspondientes equipos informáticos.

III.4.- CONTRATOS DE SUMINISTROS

Los suministros han supuesto el 25% del número de contratos examinados y con 13.078 millones de pesetas, únicamente el 17% del importe total contratado. Respecto de 1989 el Sistema de la Seguridad Social ha experimentado una disminución, tanto en el número de estos contratos como en el volumen contratado. El INSS y el ISM son las excepciones de la disminución producida con pequeños aumentos. En el INSALUD aumenta significativamente la contratación directa pero disminuye el conjunto de la contratación de suministros.

III.4.1.- CONTRATOS DE SUMINISTROS ADJUDICADOS MEDIANTE CONCURSO

El concurso vuelve a ser la forma que experimenta una disminución interanual más significativa (26%). Caso especial es el de la Tesorería, que en 1990 adjudica por concurso escasamente la quinta parte del importe que en 1989 adjudicó mediante esta modalidad.

III.4.2.- CONTRATOS DE SUMINISTROS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

El descenso en el volumen de contratación de suministros también se deja sentir en la contratación directa pero de una manera mucho más atenuada que en la forma de adjudicación por concurso. En la Tesorería el importe de contratación por esta modalidad aumenta moderadamente y en el INSALUD lo hace de manera significativa en un 71%.

III.4.3.- EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Se han examinado los contratos adjudicados durante 1989, que ya estaban por tanto fiscalizados, pero que se han ejecutado durante 1990. Se trata de contratos de suministros de carácter nacional, celebrados por el INSALUD, para la provisión de material fungible de consumo y reposición por las diferentes entidades sanitarias y para equipos clínicos (TAC) y médicos (monitores de diálisis).

III.5.- LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Hasta aquí se ha ofrecido un panorama general de la contratación administrativa en el ámbito de la Seguridad Social. Sin embargo, conviene completar esta visión con un análisis de cada una de las entidades del Sistema, dada la gran diferencia existente entre las competencias y funciones encomendadas a ellas. Estas diferencias implican una falta de homogeneidad tanto en el número como en la naturaleza u objeto de los contratos celebrados, que es lo que ha aconsejado que las consideraciones y observaciones relativas a los expedientes de contratación se realicen por entidades.

III.5.1.- TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Tesorería ha adjudicado 14.148 millones de pesetas, el 19% del importe de la contratación fiscalizada. Respecto del pasado año se ha incrementado en un 53% el número de contratos, si bien volumen de contratación ha disminuido en un 6%.

Los contratos de obras de la Tesorería

Las inversiones por obras de la Tesorería han importado 6.526 millones de pesetas, el 15% de las del Sistema y han sido el único tipo de contratación que ha incrementado su volumen, lo que ha permitido llevar a cabo el programa de esta entidad de instalación de administraciones en distintas localidades y la reforma o el acondicionamiento de Tesorerías Territoriales (hoy Direcciones Provinciales).

La subasta es la forma de adjudicación más habitual. Las bajas han oscilado en general entre el 8% y el 13%. Excepcionalmente se han dado bajas del 0,1% y hasta del 21%, sin que fuera considerada baja temeraria por la mesa de contratación. El concurso ha sido utilizado una única vez para una contratación importante de 750 millones de pesetas. Y la contratación directa ha sido la forma habitual para la realización de modificados y complementarios, o cuando quedó desierta otra modalidad.

No hay objeciones dignas de mención a estas contrataciones y sí destacar la gran variedad de adjudicatarios, lo que refuerza la presunción de objetividad en las contrataciones.

En relación a la fiscalización de la ejecución de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, que se refieren a obras de instalación de diferentes administraciones, se deduce que las obras se han realizado en un plazo mayor que el establecido en el contrato. En cinco ocasiones este retraso se arrastra desde el mismo inicio de la obra, al no disponer el contratista de la preceptiva licencia municipal.

Tampoco se cumple el plazo para la recepción provisional, que en general es superior al legalmente establecido, pero que en ocasiones la recepción provisional es anterior a la entrega o terminación de las obras.

En todas las ejecuciones analizadas se han practicado liquidaciones provisionales por un importe incrementado sobre el presupuesto de adjudicación en un porcentaje en todo caso inferior al 10%, justificado en un aumento de las unidades obra.

Los contratos de servicios de la Tesorería

Los contratos de servicios de la Tesorería han supuesto 4.367 millones de pesetas, el 25% (la Gerencia de Informática el 21%) del importe de los servicios fiscalizados en el Sistema de la Seguridad Social, a pesar de que respecto de 1989 el volumen de contratación ha disminuido en un 35%.

Se han contratado servicios para el mantenimiento y funcionamiento de edificios y para el mantenimiento de equipos informáticos y la formación del personal que los utiliza.

La contratación directa es la modalidad empleada en la contratación de servicios para la Gerencia de Informática, a veces para suplir la escasez de recursos humanos. Estos expedientes reflejan una aceptación de las ofertas de las empresas. En efecto, existe coincidencia entre el presupuesto de adjudicación y el de contrata, sin que conste ni una valoración previa del servicio ni una depuración del primer presupuesto.

Adquisiciones y arrendamientos de bienes inmuebles

Se han fiscalizado contratos de adquisición (dieciseis contratos) y de arrendamiento (once contratos, todos ellos inferiores a 25 millones de pesetas y algunos prórrogas de contratos anteriormente celebrados) de fincas, solares o locales celebrados durante 1990 por la Tesorería para la instalación de administraciones y la reubicación de Tesorerías Territoriales. El importe de estos contratos se ha incorporado a los datos que se recogen en los anexos.

Las adquisiciones se llevaron a cabo mediante concursos de cuyos expedientes de adjudicación se deduce su plena adaptación a la norma. Además, los expedientes han sido remitidos completos, frente a lo que venía sucediendo en ejercicios anteriores.

En ocasiones se ha procedido a contrataciones directas aduciendo razones de urgencia, a pesar del informe elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social, en el sentido de que no existe peculiaridad que avale la razón de urgencia alegada en ellos. Además se ha comprobado que la adjudicación directa aprobada no produjo los resultados apetecidos en la pronta puesta en funcionamiento de los servicios.

Los contratos de suministros de la Tesorería

Los contratos de suministros de la Tesorería han alcanzado una cifra de 3.254 millones de pesetas, lo que supone el 25% del importe de los fiscalizados en el Sistema, si bien dicha cifra representa una disminución en algo más de la mitad del importe de lo contratado en 1989.

Los suministros adquiridos han sido material de oficina, modelaje centralizado, mobiliario y equipos y material informático.

La disminución del importe ha afectado sobre todo a la modalidad de concurso. Por el contrario, la contratación directa ha aumentado ligeramente y ha sido utilizada para la adquisición de mobiliario y equipos y material informáticos, éstos últimos a propuesta y tramitados por la Gerencia. La adjudicación directa del modelaje para el proyecto del sistema integrado de contabilidad de la Seguridad Social (SICOSS) se fundamentó en la cuantía de contratación. Los contratos de adquisición de equipos informáticos y dotación de oficinas se justificaron en la exigencia de uniformidad de los bienes.

III.5.2.- INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

El INSALUD es la entidad que más ha contratado dentro del ámbito de la Seguridad Social. El importe adjudicado por el INSALUD, 38.738 millones de pesetas, supone el 52 % de la contratación fiscalizada en 1990 y además ha crecido en un 77% respecto de 1989.

Los contratos de obras del INSALUD

Las inversiones por obras del INSALUD se han materializado en ciento trece contratos por un importe de 22.954 millones de pesetas, que representa también un 52% de las inversiones por obras del Sistema. El volumen de estas inversiones ha experimentado un importantísimo crecimiento, resultando cuatro veces superior al volumen ya considerable de 1989.

La documentación remitida, tanto por las Direcciones Territoriales y Provinciales como por la propia Dirección General, ha sido bastante incompleta. El Tribunal, para llevar a cabo su fiscalización, ha debido requerir frecuentemente los documentos esenciales en la formalización de los expedientes de contratación.

El INSALUD ha acudido a la subasta el mismo número de veces que el año pasado, aunque por un importe superior al doble. Con todo, esta forma de adjudicación es la que menor crecimiento interanual ha experimentado. Mediante subasta se han contratado remodelaciones y ampliaciones de ambulatorios, consultorios y áreas de servicios generales de algún gran centro sanitario. Las bajas, lejos de ser temerarias, se han mantenido en torno al 5%, lo que denota una gran similitud entre los concurrentes a cada proceso de selección.

La mayor parte de las obras han oscilado entre 50 y 70 millones, siendo las cotas inferior y superior de 25 y 150 millones respectivamente.

El concurso ha sido la forma de adjudicación que más ha crecido. Se ha convertido, no sólo en la modalidad más utilizada, sino también ha llegado a representar el 82% del importe de lo adjudicado para la realización de obras en la entidad.

El concurso se ha utilizado para la selección de los adjudicatarios de las grandes obras contratadas por la Dirección General, aunque excepcionalmente se ha empleado también por la Dirección Territorial de Asturias y por la Dirección Provincial de Huesca. En concreto, se han contratado la construcción de veintiún centros de salud y treinta obras de ampliación, de reforma, instalaciones y planes directorios de grandes centros sanitarios.

Los importes han oscilado entre 92 y 1.545 millones de pesetas.

El volumen de lo adjudicado por contratación directa también ha sido mucho mayor que en ejercicios anteriores y más del doble que lo adjudicado por subasta.

Los expedientes examinados hacen referencia a modificados y reformas de contratos preexistentes, por lo que esta forma de adjudicación es legalmente pertinente.

Asimismo, en una serie de expedientes se justifica la contratación directa por razón de la cuantía, al ser ésta inferior a 50 millones. Se trata de obras de instalación de grandes aparatos clínicos (TAC, resonancia magnética, de radiología o simuladores). También en esta serie hay pequeñas obras de modificaciones o de reforma.

En un expediente para la instalación de un equipo de resonancia magnética de cuantía superior a 50 millones se alegaron razones de urgencia para justificar esta forma de adjudicación. En otro, en cambio, no ha sido posible comprobar la razón que fundamentó acudir a esta modalidad, por cuanto la documentación recibida, a pesar de los requerimientos realizados, ha resultado insuficiente.

Por último, en la fiscalización llevada a cabo sobre la ejecución de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores destacan los referidos al programa para la construcción de centros de salud. En la fase de ejecución de estos contratos se ha observado que son frecuentes los retrasos en el inicio de las obras, debido sobre todo a que en el momento de extender el acta de replanteo aún no se disponía de la licencia municipal de obras, al no haberse satisfecho las correspondientes tasas.

Destaca también el que la recepción provisional siempre se haya realizado fuera del plazo fijado reglamentariamente. En ocasiones este retraso se justifica en que se encuentra pendiente de aprobación un reformado o un modificado, cuya ejecución sin embargo ya está fiscalizada.

También resulta habitual el retraso en la práctica de la liquidación provisional.

Los contratos de servicios del INSALUD

Los contratos de servicios del INSALUD han importado 7.117 millones de pesetas, el 40% de lo fiscalizado en este tipo de contratos en el área de la Seguridad Social.

El volumen de lo contratado es análogo al del ejercicio de 1989, pero el número de contratos ha sido muy superior, al haberse recibido más expedientes relativos a la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza de las grandes instituciones sanitarias.

La forma de adjudicación de estos servicios es habitualmente el concurso, por cuanto el tipo de necesidades a cubrir (vigilancia, mantenimiento y limpieza) y su cuantía (superior a 25 millones de pesetas) así lo imponen.

Se ha llevado a cabo la fiscalización de diez contratos, celebrados por instituciones sanitarias, a pesar de ser su presupuesto inferior a 25 millones de pesetas y ello debido al interés que suscita su excepcionalidad, ya que, en general, los contratos promovidos y ejecutados por las instituciones sanitarias son celebrados por los órganos territoriales o por la propia Dirección General del INSALUD.

La documentación de los expedientes de contratación resulta muy dispar, tanto en el número de los documentos, como en el contenido de los extractos de los expedientes. Los documentos que más habitualmente se omiten son la propuesta razonada del servicio que promueve la contratación, el certificado de existencia de crédito y el informe crítico del gasto. La publicación de la adjudicación en el "BOE" se ha omitido siempre.

Cuando se reclama esta documentación, es frecuente recibir, en lugar del certificado de existencia de crédito y del informe crítico del gasto, una certificación extemporánea en la que se señala que en el período al que el contrato se refiere existía crédito disponible para hacer frente al gasto. Esta actuación

revela que en la formación del expediente estos extremos se pasaron por alto y los créditos se comprometieron sin proceder a su retención y con desconocimiento de la aplicación presupuestaria. En algún caso las deficiencias formales se manifiestan en que los miembros de la mesa han omitido la firma de las actas del proceso de adjudicación. Los problemas señalados son menores cuando la contratación se lleva a cabo para atender servicios de centros hospitalarios con experiencia anterior.

A la contratación directa se ha acudido para contratos de limpieza que suponían prórroga de anteriores, para contratar el mantenimiento y asistencia técnica de equipos informáticos, cuyo adjudicatario había sido el proveedor de los equipos y sistemas y para contratos de redacción de diferentes proyectos de obra de hospitales.

Los contratos de suministros del INSALUD

Los suministros contratados por el INSALUD han importado 8.667 millones de pesetas, el 66% de este tipo de contratos fiscalizados en el área de la Seguridad Social. Este importe ha sido cercano al destinado a suministros por esta entidad en 1989. También se han mantenido el tipo de suministros y las formas de adjudicación.

El concurso ha sido la modalidad para proceder, a nivel nacional, a realizar las selecciones siguientes: adquisición de material fungible, de consumo y reposición con destino a instituciones sanitarias (material que es a la postre adquirido por cada institución según sus necesidades y consignaciones presupuestarias); adquisición de aparatos clínicos de alta tecnología, con destino a los diferentes centros hospitalarios; y adquisición de materiai informático, de vehículos para unidades móviles y de talonarios de recetas farmacéuticas.

En el examen de estos expedientes únicamente se ha detectado que no consta la preceptiva publicación de la convocatoria en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".

Los concursos para la satisfacción de las necesidades más particulares de los centros sanitarios (material desechable de quirófano y cura, v.gr.) se han celebrado en su ámbito territorial.

La dualidad entre el órgano de propuesta y ejecución y el de la adjudicación ha generado deficiencias, especialmente en lo que a la publicación de las adjudicaciones en el "BOE" se refiere.

La contratación directa ha sido empleada en la adjudicación de suministros cuando tienen carácter de material homologado, en vehículos de "UVI móvil" y en sistemas de digitalización de imágenes radiográficas y de telerradiología. Asimismo se utilizó para la adquisición de cinco unidades modulares para oficinas administrativas.

En el examen de estas contrataciones se observa que las depuraciones de precio no suelen existir y en las raras bajas que se obtienen, éstas rondan el 1%. Únicamente en la adquisición de material informático homologado las bajas han llegado al 8%.

Para la fiscalización de la ejecución de contratos adjudicados en ejercicios anteriores el Tribunal requirió a las instituciones sanitarias la documentación que acreditara el consumo del material fungible objeto de los concursos públicos C.P. 1/89, para la adquisición de jeringuillas, C.P. 2/89, para la adquisición de bolsas de recogida de orina y C.P. 3/89, para la adquisición de dializadores. Este requerimiento fue contestado por ciento cuarenta y cuatro centros, resultando adecuadas las contestaciones de ciento treinta y dos centros.

Del análisis de cada uno de los concursos se deduce:

En el C.P. 1/89, que fue adjudicado por 295 millones de pesetas, se ha justificado un gasto de más de 750 millones, dos veces y media superior al previsto, con una desviación absoluta de más de 455 millones de pesetas. De esta manera el concurso como actuación previsora, ha quedado muy lejos de atender las necesidades reales que han manifestado los centros que contestaron de manera positiva al requerimiento del Tribunal. Mejorar la estimación de las necesidades debería contribuir a la obtención de un precio más ventajoso y a evitar desviaciones que pueden comprometer el presupuesto del ejercicio siguiente.

En el examen de la ejecución de este concurso se observa que cuatro centros aparecen sin consumo. Otros cuarenta y tres no han remitido la documentación justificativa del consumo. Se ha dejado así sin justificar cerca de 250 millones de pesetas. En dos centros se certifica la existencia de consumo, pero no se especifica su cuantía. Por último, cuatro centros justifican un consumo de jeringuillas cercano a 25 millones de pesetas, que fueron adquiridas a un proveedor distinto al del concurso.
En el C.P. 2/89 la adjudicación fue por 140 millones de pesetas y el importe de las adquisiciones realizadas por los centros fue de algo menos de la mitad. Se manifiesta por tanto también aquí, aunque de signo contrario, una falta de adecuación entre las necesidades que se quieren cubrir con el concurso y el gasto real que justifican los centros.

En la fiscalización de la ejecución de este concurso destaca que treinta y cinco centros no señalan consumo de este material. No obstante, dos centros consumieron diferentes bolsas de recogida de orina por entender los servicios respectivos que las adjudicadas en este concurso no resultaban idóneas. Otros veintinueve centros no han remitido la documentación justificativa del consumo. Se ha dejado así de justificar 22 millones de pesetas, que supone un tercio del gasto realizado. También en este concurso hay centros que certifican consumo, pero no indican su cuantía.

En el C.P. 3/89 las adquisiciones por valor de 285 millones de pesetas fueron considerablemente inferiores a los 750 millones del importe de adjudicación. Vuelve, por tanto, a producirse la falta de adecuación antes comentada.

En el examen de la documentación facilitada por los centros se observa el importante número que no señalan consumo, hasta noventa y cuatro centros. Las adquisiciones sin documentación justificativa afectan a quince centros con un importe cercano a los 100 millones de pesetas. Dos centros se surtieron de proveedor distinto por importe de 3 millones de pesetas y ocho más adquirieron modelos distintos a precios muy superiores, por importe de 67 millones.

Además de estos concursos de material fungible, se han fiscalizado en fase de ejecución, en relación con la adquisición de equipos sanitarios, los concursos siguientes:

El C.P. 6/89, que tenía por objeto el suministro de trece "TAC", fue adjudicado a tres empresas por un importe superior a los 750 millones de pesetas.

La recepción definitiva de estos equipos resultó de conformidad, una vez instalados en los correspondientes centros hospitalarios.

El C.P. 13/89, para el suministro de monitores de diálisis, sesenta de ellos unipunción y dieciocho bipunción, fue adjudicado a tres empresas por un importe superior a los 260 millones de pesetas.

La recepción de los equipos en los diferentes hospitales fue asimismo de conformidad.

III.5.3.- INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El INSS, Entidad Gestora de la mayor parte de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, ha contratado 4.585 millones de pesetas, lo que representa el 6% de la contratación fiscalizada en esta área durante 1990.

Los contratos de obras del INSS

Las obras del INSS representan también un 6% del importe de las del Sistema. El volumen de estas inversiones ha resultado más de diez veces superior al de 1989. Este esfuerzo inversor ha permitido impulsar el programa de instalación de los centros de atención e información de la Seguridad Social (CAISS), así como abordar la reforma de la residencia "Marciano Izquierdo" y la reforma y ampliación de la sede de la Dirección Provincial de Badajoz. Asimismo, se han realizado una serie de pequeñas obras para la instalación de equipos informáticos y algún modificado en obras anteriores.

Los expedientes se han recibido completos, si bien, la publicación de la adjudicación en el "BOE" no siempre se aporta.

La subasta ha sido la forma habitual de adjudicación y supone hasta el 94% de las adjudicaciones, lográndose una baja media del 11'8%.

La contratación directa se ha utilizado para adjudicar los modificados y las pequeñas obras necesarias para la instalación de equipos informáticos.

La fiscalización de la ejecución de contratos adjudicados en ejercicios anteriores viene referida a obras de reforma de Direcciones Provinciales cuyos contratos fueron adjudicados durante 1989. El análisis se ha podido realizar con suficiente documentación y leves incidencias, como ha sido un retraso de seis meses en la ejecución de una obra, debido a la falta de las autorizaciones de acometida del agua y de la luz. La incidencia más destacable ha consistido en la resolución de un contrato por causa no imputable al contratista, en la que se fijó una indemnización cuya cuantía fue acorde con los gastos que se habían efectuado.

Por último, los retrasos en la recepción provisional son habituales y oscilan entre los cuatro y nueve meses.

Los contratos de servicios del INSS

Los contratos de servicios adjudicados por el INSS durante 1990 han supuesto el 5% del importe de los fiscalizados en el Sistema de la Seguridad Social. El volumen de lo contratado, 973 millones de pesetas, ha experimentado un aumento del 50% respecto de 1989.

Los servicios adjudicados por concurso han sido los de limpieza y vigilancia jurada de diferentes edificios y dos de asistencia técnica, el de carácter informático para el programa de gestión de prestaciones de la Seguridad Social ("PROGESPRESS") y la campaña informativa anual sobre revalorización de pensiones y prestaciones.

La contratación directa ha sido la forma de adjudicación empleada en la aprobación de la prórroga de contratos anteriores para la vigilancia de edificios y en contratos de mantenimiento de equipos informáticos y de formación de su personal, siendo en estos casos los adjudicatarios las empresas suministradoras de los equipos. Hay que aceptar en consecuencia que el procedimiento de selección se ha adecuado a la finalidad de los contratos.

Los contratos de suministros del INSS

Los suministros contratados por el INSS han supuesto el 8% del importe de los del Sistema. El volumen de los suministros de esta entidad (1.111 millones de pesetas) ha sido mayor que el correspondiente a 1989 en un 20%. Las adquisiciones se han centrado en material informático.

La forma de adjudicación ha dejado de ser únicamente la contratación directa, y en este ejercicio puede observarse que el 81% del importe de la contratación se ha adjudicado por concurso, por cuanto esta modalidad se ha utilizado para las adquisiciones más importantes.

La contratación directa ha seguido empleándose para la obtención de artículos que complementan o incrementan equipos ya existentes.

III.5.4.- INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

Durante 1990, el INSERSO se ha convertido en la segunda entidad que mayor volumen ha contratado, 16.821 millones de pesetas, que representan el 22% de lo adjudicado en el área de la Seguridad Social. Además, ha sido la que mayor crecimiento ha experimentado, de tal manera que su volumen se sitúa en un 277% del adjudicado en 1989.

Los contratos de obras del INSERSO

Las inversiones por obras del INSERSO, con un importe de 11.465 millones de pesetas, han representado un 26% de las del Sistema. Estas inversiones han experimentado un crecimiento muy fuerte respecto de 1989, hasta situarse en 1990, en un 632% de lo adjudicado en el año anterior.

La documentación remitida ha sido en general suficiente para realizar la fiscalización.

El INSERSO ha acudido a la subasta para la construcción de hogares de la tercera edad, con presupuestos individuales que han oscilado entre los 60 y 120 millones de pesetas, de los centros de atención a minusválidos psíquicos (CAMP), de Redondela y Sarria, del Centro de recogida de refugiados de Sevilla, para la adaptación a la normativa de residencias de la tercera edad y para obras realizadas en diferentes Direcciones Provinciales.

Las bajas obtenidas han oscilado normalmente entre el 8% y el 10% (excepcionalmente se han producido bajas que han alcanzado el 2% y el 15,5%), sin que en ningún caso se hayan detectado bajas temerarias.

El concurso se ha utilizado para la adjudicación de las obras de mayor importancia, entre las que se encuentra la construcción de siete residencias de la tercera edad con un coste individual que oscila entre 400 y 900 millones de pesetas.

Las adjudicaciones se aprobaron teniendo en cuenta las propuestas de la mesa de contratación, que en cada caso consideraba junto a las ofertas económicas los informes técnicos de la unidad de inversiones, en donde se señalan las ventajas técnicas de las distintas ofertas. Cuando la propuesta no se ha hecho en favor del mejor postor, es porque la mesa ha considerado la oferta que, no siendo en ningún caso la de mayor cuantía, conjugaba una serie de aspectos técnicos que la hacían más ventajosa. Entre estos aspectos destaca la importancia que se concede al porcentaje, a cargo del adjudicatario, aplicado al control de calidad, que en los casos estudiados se eleva al 3% del presupuesto.

Los concursos se adjudicaron con bajas comprendidas entre el 2% y el 4% y a contratistas diferentes. Hay que señalar, sin embargo, que se estima insuficiente la justificación dada en algún expediente para incluir la cláusula de revisión de precios.

Los reformados y obras complementarias de otras anteriores se han adjudicado mediante contratación directa, conforme a lo legalmente autorizado. Además de estas adjudicaciones se ha acudido a esta modalidad en las obras de acondicionamiento, reparación y ampliación de distintos centros.

La fiscalización de la ejecución de contratos adjudicados en ejercicios anteriores se refiere a obras de adaptación a la normativa de hogares de la tercera edad. En ella destaca que el 60% de las obras fueron objeto de un proyecto de reformado aprobado después de la fecha fijada para la terminación y en algunos casos de la fecha de ampliación del plazo de ejecución que había sido concedida. Las ampliaciones han oscilado entre los cuatro y trece meses.

Las recepciones provisionales se han llevado a cabo siempre después del plazo legalmente establecido. En un caso, después de diez meses de la fecha fijada en la correspondiente ampliación para la terminación de la obra, aún no se había procedido a la recepción provisional.

Para una de estas obras se ha incoado un expediente de resolución del contrato por hallarse ésas abandonadas. La incoación se produjo diez meses después de la fecha fijada para la terminación de las obras aun cuando sólo se ejecutó y abonó un 60% de la obra contratada.

Los contratos de servicios del INSERSO

Los contratos de servicios del INSERSO han importado 5.356 millones de pesetas, que suponen el 30% del volumen contratado por servicios en la Seguridad Social. El crecimiento respecto de lo fiscalizado en 1989 ha sido del 26%.

Los servicios contratados han sido de limpieza de los centros administrativos y para la impresión de revistas y folletos. Destaca por su importancia, como ya se dijo, la contratación del programa de vacaciones para la tercera edad. En relación con este programa se procedió a adjudicar actuaciones publicitarias en televisión mediante contratación directa. No se estima que la causa aducida para acudir a esta modalidad, la reconocida urgencia, sea consistente, por cuanto se trata de una actuación de carácter anual, fácilmente previsible.

El concurso público ha sido la manera de adjudicar el 96% de lo contratado.

III.5.5.- INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

El ISM es la entidad que menos ha contratado en el área de la Seguridad Social. El importe adjudicado por esta entidad se eleva a 530 millones de pesetas y tan sólo supone el 1% de la contratación fiscalizada en 1990. Este importe ha decrecido un 66% respecto de 1989.

Los expedientes que se reciben en esta entidad, tal vez debido a lo escaso de su número, no revisten, en general, complejidad y en ellos se respetan al máximo los procedimientos establecidos. Únicamente fue necesario reclamar el certificado de clasificación de las empresas concurrentes a un proceso de selección y un certificado acreditativo de la existencia de crédito. Ambos documentos fueron recibidos sin demoras.

Los contratos de obras del ISM

La subasta fue la forma de adjudicación para la contratación de las obras de construcción o reforma de diferentes casas del mar, lográndose una baja media del 7'2%.

Se acudió a la contratación directa en dos ocasiones para la realización de obras de reparación y reforzamiento de estructuras. En la primera de ellas se adujo causa de urgencia. En la segunda, el adjudicatario lo fue el de la obra principal. Se estima por tanto que en ambos supuestos el empleo de esta forma de adjudicación fue razonable.

La fiscalización de la ejecución de contratos adjudicados en ejercicios anteriores se ha referido también a obras de construcción de casas del mar. Lo más significativo de esta fiscalización, además de los retrasos en la ejecución de las obras (entre seis y dieciseis meses) y los retrasos en la recepción provisional (en algún caso supera el año) ha sido la resolución de un contrato. Se trata del contrato para la construcción de la Casa del Mar de Melilla y de un reformado, adjudicados ambos por un importe total de 133.041.448 ptas. a la misma empresa, la cual, finalizado ya el plazo de ejecución, abandonó las obras pudiendo certificar tan sólo el 35 % de su importe. Ante estos hechos el ISM ordenó la incautación de la fianza definitiva y además se fijó una indemnización por daños y perjuicios de 6.745.885 pesetas.

Los contratos de suministros del ISM

Sólo se ha fiscalizado un contrato de suministros que se adjudicó por concurso, cuya finalidad fue la adquisición de dos equipos de radiodiagnóstico, no habiéndose detectado en la fiscalización ninguna irregularidad.

SECTOR PUBLICO TERRITORIAL

COMUNIDADES AUTONOMAS

ÍNDICE

I.1 CONSIDERACIONES PREVIAS

I.2 LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DEL SECTOR

I.2.1. Análisis contables

I.2.2. Operaciones del presupuesto corriente

I.2.3. Operaciones de presupuestos cerrados

I.2.4. Operaciones extrapresupuestarias

I.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

I.3.1. Financiación

I.3.2. Endeudamiento

I.3.3. Avales

I.3.4. Resultados presupuestarios y remanente de tesorería

I.4 SÍNTESIS DE LOS INFORMES TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES

- Andalucía
- Aragón
- Canarias
- Cantabria
- Castilla - La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Foral de Navarra
- Galicia
- Islas Baleares
- La Rioja
- Madrid
- País Vasco
- Principado de Asturias
- Región de Murcia
- Valenciana

I. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

I.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

El contenido del apartado del Informe Anual referido al sector Comunidades Autónomas recoge los resultados del análisis global y resumido de los que en este ejercicio han sido elaborados por este Tribunal, o por los Órganos de Control Externo de las Comunidades que disponen de ellos. En 1990 el Tribunal de Cuentas ha revisado los informes de las Comunidades de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Foral de Navarra, País Vasco y Valenciana, todas ellas con Órganos de Control Externo, y elaborado los correspondientes a las diez restantes.

El presente informe se ha estructurado con dos criterios bien diferenciados:

- Uno de ellos, de carácter global, efectuando análisis contables y sobre la gestión y situación económico-financiera de las Administraciones Generales del sector en diversos aspectos significativos y por cuya agregación se pueda alcanzar algunas conclusiones homogéneas (apartado I.2).

- El otro criterio, al que responde el apartado I.4, es el de exponer un resumen de los aspectos específicos que se han considerado más destacables en cada una de las Comunidades Autónomas, lo que lleva consigo una mejor imputación de las observaciones formuladas.

Los informes emitidos por otros Órganos de Control Externo han sido objeto de revisión por este Tribunal, reproduciéndose aquí sólo las conclusiones que constan o se deducen de aquéllos o de la información adicional solicitada en la medida en que han parecido congruentes y alterando, en su caso, las cifras o criterios que se han estimado procedentes, conforme a lo dispuesto en el art. 29.2, párrafo segundo, de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

El ejercicio de esta facultad, junto con la heterogeneidad de las estructuras y contenidos de estos informes territoriales elaborados por otros órganos, ha exigido a veces una más amplia exposición a fin de plasmar suficientemente la reordenación efectuada facilitando con ello su examen por las correspondientes Asambleas Legislativas de las modificaciones, en su caso, efectuadas. Ejemplo de ello es la relación de ajustes incluida en los informes.

Por último, es de precisar que en la idea central de que este informe del sector debe ser fiel reflejo del contenido de los que en él se integran, su extensión y el tratamiento o contenido de su análisis, son consecuencia de la documentación remitida o de los distintos programas de fiscalización aprobados y en cuyo cumplimiento han sido elaborados los informes que le han servido de base.

I.2.- LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DEL SECTOR

I.2.1.- ANÁLISIS CONTABLES

Partiendo de la información suministrada por las cuentas de liquidación presentadas por las Comunidades Autónomas, se ha efectuado su análisis del que resultan las magnitudes que se recogen a continuación, unas contenidas en once anexos y otras en estados internos a lo largo del texto. Tanto unos como otros incluyen las cifras contabilizadas, sin perjuicio de los comentarios que se hagan de su realidad.

En los anexos I-1.1 y I-1.2 se presentan las cuentas agregadas de gastos e ingresos de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas.

En los restantes anexos se presentan exclusivamente los datos correspondientes a las Administraciones Generales de las Comunidades, si bien, como consta en los apartado de Observaciones Generales de este Informe correspondientes a Aragón y Navarra incluyen también los de su Administración Institucional.

I.2.2.- OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

I.2.2.1.- Liquidación de los presupuestos de gastos

A) Examen de los créditos

En el anexo I-2.1 se presenta la liquidación de los presupuestos de los diferentes subsectores, en el que los créditos iniciales por 4.700.958 millones de pesetas, alcanzan posteriormente 5.585.853 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 19% por modificaciones presupuestarias de créditos.

Del importe total de las modificaciones presupuestarias de crédito que ascienden a 884.895 millones de pesetas, son en las Comunidades de Aragón (72%) y Baleares (69%) donde se producen las modificaciones más importantes en relación con sus créditos iniciales.

Del examen del anexo I-2.2 se puede concluir que las incorporaciones de crédito son el tipo modificativo de mayor cuantía, seguido por los créditos generados por ingresos.

B) Examen de las obligaciones reconocidas

En el anexo I-2.3 se presentan clasificadas por capítulos las obligaciones reconocidas en 1990.

La estructura porcentual por grupos de operaciones es similar a la del ejercicio anterior y es la siguiente:

	(%)
Operaciones corrientes	71
Operaciones de capital	25
Operaciones financieras	4
TOTAL	100

Por importes el resultado de la comparación con los del ejercicio anterior ofrece las siguientes variaciones:

	IMPORTE		VARIACIONES	
	1990	1989	Absolutas	Relativas
Obligaciones de ejercicios cerrados (*)	342	724	(382)	(53)
Operaciones corrientes	3.529.638	2.936.503	593.135	20
Operaciones de capital	1.250.015	1.013.977	236.038	23
Operaciones financieras	181.284	163.497	17.787	11
TOTAL	4.961.279	4.114.701	846.578	21

(*) Comunidad Autónoma de Madrid

Se observa un mayor incremento relativo de las operaciones de capital debido fundamentalmente a las inversiones reales.

Por Comunidades Autónomas las obligaciones reconocidas ofrecen un mayor incremento en La Rioja (56%) y Navarra (54%), y se deben en La Rioja a operaciones de capital y en Navarra a transferencias corrientes. Son las siguientes:

(En millones de pesetas y %)

COMUNIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1990 (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1989 (2)	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS (3)=(1)-(2)	RELATIVAS (4)=(3)x100:(2)
Andalucía	1.278.737	1.050.208	228.529	22
Aragón	63.163	47.663	15.500	33
Canarias	215.939	180.945	34.994	19
Cantabria	54.588	41.821	12.767	31
Castilla-La Mancha	113.732	115.238	(1.506)	(1)
Castilla y León	139.139	104.220	34.919	34
Cataluña	1.099.968	911.900	188.068	21
Extremadura	71.069	56.496	14.573	26
Foral de Navarra	151.166	98.063	53.103	54
Galicia	340.682	285.621	55.061	19
Islas Baleares	30.573	23.608	6.965	30
La Rioja	20.934	13.418	7.516	56
Madrid	200.227	177.091	23.136	13
País Vasco	436.598	382.902	53.696	14
Principado Asturias	68.552	54.519	14.033	26
Región de Murcia	62.995	66.386	(3.391)	(5)
Valenciana	613.217	504.602	108.615	22
TOTAL	4.961.279	4.114.701	846.578	21

Hay que resaltar también la disminución registrada en Murcia (5%), por las obligaciones reconocidas en operaciones financieras.

En operaciones corrientes y de capital las Comunidades con mayor peso específico conjunto son: Andalucía (28 y 23%), Cataluña (24 y 11%) y Comunidad Valenciana (14 y 8%). En operaciones financieras el mayor peso específico corresponde a Cataluña (58%) por endeudamiento principalmente, como se desprende todo ello del citado anexo I-2.3.

El grado de ejecución medio que se desprende de sus datos contables es el 89%, destacando el de operaciones corrientes con un 96%. Los porcentajes correspondientes a operaciones corrientes pueden variar sustancialmente por los criterios seguidos en algunas Comunidades en cuanto al tratamiento del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, del Régimen Especial Fiscal de Canarias, de la Administración Institucional y de la Seguridad Social, entre otros. El detalle es el siguiente:

(En %)

Comunidades	Operaciones Corrientes	Operaciones de capital	Operaciones financieras	Total
Andalucía	97	81	87	93
Aragón	79	51	53	61
Canarias	93	67	72	83
Cantabria	91	64	99	79
Castilla-La Mancha	90	74	73	79
Castilla y León	97	51	94	66
Cataluña	99	94	100	98
Extremadura	96	50	60	61
Foral de Navarra	98	86	93	93
Galicia	96	65	100	84
Islas Baleares	95	60	95	73
La Rioja	90	59	59	71
Madrid	93	68	91	81
País Vasco	100	91	100	98
Principado de Asturias	91	69	68	76
Región de Murcia	94	73	78	83
Valenciana	94	70	95	90
TOTAL	96	72	94	89

I.2.2.2.- Liquidación de los presupuestos de ingresos

A) Examen de las previsiones

En el anexo I-2.4 se presenta la liquidación de los presupuestos de las diferentes Comunidades, en el que las previsiones iniciales ascienden a 4.700.978 millones de pesetas, alcanzando las previsiones definitivas 5.268.749 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 12%. La diferencia con los créditos finales (5.585.853 millones de pesetas) obedece a la falta de contabilización de las modificaciones en las previsiones iniciales seguidas por algunas Comunidades, como Cataluña y Galicia en su totalidad y algunas otras en parte, en algún tipo modificativo.

B) Examen de los derechos reconocidos

En el anexo I-2.5 se presentan clasificados por capítulos los derechos reconocidos en 1990.

La estructura porcentual por grupos de operaciones es la siguiente:

(En %)

Operaciones corrientes	79
Operaciones de capital	9
Operaciones financieras	12
TOTAL	100

Por importes el resultado de la comparación con los del ejercicio anterior ofrece las siguientes variaciones:

	IMPORTE		VARIACIONES	
	1990	1989	Absolutas	Relativas
Operaciones corrientes	4.000.051	3.407.344	592.707	17
Operaciones de capital	442.773	369.895	72.878	20
Operaciones financieras	600.670	442.860	157.810	36
TOTAL	5.043.494	4.220.099	823.395	20

Se observa un mayor incremento relativo de las operaciones financieras, debido fundamentalmente al endeudamiento.

Por Comunidades Autónomas los derechos reconocidos experimentan un mayor incremento en Navarra (85%), Extremadura (39%), Castilla y León (36%) y Aragón (34%), según se puede observar en el cuadro siguiente:

(En millones de pesetas y %)

COMUNIDADES	DERECHOS RECONOCIDOS 1990 (1)	DERECHOS RECONOCIDOS 1989 (2)	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS (3)=(1)-(2)	RELATIVAS (4)=(3)x100:(2)
Andalucía	1.222.340	1.084.008	138.332	13
Aragón	80.046	59.652	20.394	34
Canarias	219.274	196.012	23.262	12
Cantabria	49.385	38.993	10.392	27
Castilla-La Mancha	124.518	116.453	8.065	7
Castilla y León	212.119	155.729	56.390	36
Cataluña	1.093.856	902.882	190.974	21
Extremadura	83.018	59.795	23.223	39
Foral de Navarra	188.636	101.845	86.791	85
Galicia	334.392	263.610	70.782	27
Islas Baleares	32.470	29.544	2.926	10
La Rioja	22.658	17.764	4.894	28
Madrid	214.024	174.611	39.413	23
País Vasco	428.739	369.742	58.997	16
Principado Asturias	71.008	57.018	13.990	25
Región de Murcia	63.407	69.868	(6.461)	(9)
Valenciana	603.604	522.573	81.031	16
TOTAL	5.043.494	4.220.099	823.395	20

Es de destacar también la disminución registrada en Murcia (9%), que se debe a las transferencias de capital (subvenciones CEE) y a la disminución del reconocimiento de los derechos por endeudamiento.

En operaciones corrientes las Comunidades con mayor peso específico son: Andalucía (26%), Cataluña (23%) y Comunidad Valenciana (13%). En operaciones de capital destacan Andalucía (24%), Castilla-La Mancha (13%) y Cataluña (10%), siendo la segunda por la inclusión en el capítulo 7 de las transferencias corrientes al Fondo Nacional de Cooperación Municipal. En operaciones financieras destacan Cataluña (20%), Andalucía (15%), Castilla y León (14%) y Madrid (10%), como se observa todo ello en el citado anexo I-2.5.

El grado de ejecución medio resultante de sus datos contables es el 99%, destacando el de operaciones corrientes. Los porcentajes correspondientes a operaciones corrientes y financieras pueden variar sustancialmente no sólo por los criterios seguidos por algunas Comunidades apuntadas en el subepígrafe I.2.2.1.B) anterior, sino también por la circunstancia de haberse reconocido derechos por los remanentes de tesorería aplicados y por los criterios seguidos en la contabilización del endeudamiento por préstamos no dispuestos. El detalle es el siguiente:

(En %)

Comunidades	Operaciones corrientes	Operaciones de capital	Operaciones financieras	Total
Andalucía	94	118	54	90
Aragón	112	87	100	105
Canarias	99	100	141	103
Cantabria	93	28	80	84
Castilla-La Mancha	108	94	6	89
Castilla y León	109	92	93	102
Cataluña	103	116	249	111
Extremadura	106	87	21	84
Foral de Navarra	142	108	13	126
Galicia	100	82	81	96
Islas Baleares	121	65	100	108
La Rioja	111	67	78	95
Madrid	96	100	100	97
País Vasco	103	93	57	96
Principado de Asturias	98	80	100	95
Región de Murcia	101	69	93	92
Valenciana	100	99	100	100
TOTAL	101	97	86	99

Los porcentajes anteriores se han obtenido, salvo en el País Vasco (por no existir información sobre el remanente de tesorería

aplicado en el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ni en la Cuenta General presentada), sin tener en cuenta el remanente de tesorería incorporado en su presupuesto, ya que por su naturaleza es una mera fuente de financiación.

I.2.3.- OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

En los anexos I-2.6 y I-2.7 se detallan los movimientos habidos, de los que destacan por el movimiento en deudores:

- Navarra con unos aumentos y disminuciones de 10.745 y 17.628 millones de pesetas, respectivamente.
- Castilla y León con unos aumentos y disminuciones de 7.552 y 7.800 millones de pesetas, respectivamente, debidos principalmente a reclasificaciones de saldos de FCI.
- Madrid con una baja de 5.844 millones derivada de anulaciones de operaciones de endeudamiento no dispuestas.
- Comunidad Valenciana con una disminución de 5.026 millones de derechos procedentes en su mayor parte de 1988 y 1989, y que se debe al criterio erróneo de reconocer derechos mediante estimación de los mismos.

En acreedores cabe mencionar por su disminución (4.043 millones) al País Vasco debido al criterio erróneo seguido por esta Comunidad en el registro de las obligaciones por transferencias corrientes y de capital.

I.2.4.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el anexo I-2.8 se detallan los movimientos habidos en acreedores, de los que se destacan por su saldo al 31 de diciembre de 1990 Comunidad Valenciana y Madrid por operaciones de préstamos a corto plazo para cubrir déficits transitorios de tesorería.

En el anexo I-2.9 se detallan los movimientos habidos en deudores, destacando las Comunidades de Madrid y Extremadura, la primera por el incorrecto registro en esta rúbrica de las operaciones denominadas de refinanciación y la segunda por los gastos presupuestarios que en su mayor parte se encuentran reconocidos y pendientes de aplicar al presupuesto.

I.3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Con el mismo ámbito del apartado I.2 se examinan determinadas rúbricas que demandan un análisis comparativo, por su especial significación, al ser indicativas de la gestión económico-financiera de las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo, al contrario que en el apartado I.2, se manejan aquí los datos resultantes de las fiscalizaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, o por los otros Órganos de Control Externo una vez revisadas.

I.3.1.- FINANCIACIÓN

En las Comunidades Autónomas sometidas al Régimen Común (excluidas por tanto Navarra y País Vasco) sigue vigente en este ejercicio el método para la aplicación del sistema de financiación acordado el 7 de noviembre de 1986 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Los derechos reconocidos totales, una vez ajustados, con el detalle que figura en los respectivos informes territoriales elaborados por este Tribunal o en el apartado I.4 de los elaborados por los otros Órganos de Control Externo, son los que figuran a continuación:

(En millones de pesetas)

Comunidades	Financiación Básica	Financiación Solidaridad.	Financiación Complementaria	Financiación Propia	Otros	Total
ANDALUCÍA	776.234	95.633	211.726	87.186	4.248	1.175.027
ARAGÓN	39.655	4.824	5.016	5.681	1.654	56.830
CANARIAS	112.058	20.232	14.483	47.229	2.313	196.315
CANTABRIA	14.996	2.098	6.332	12.226	3.534	39.186
C.-LA MANCHA	51.844	17.355	12.526	8.416	1.804	91.945
C. Y LEÓN	81.702	27.686	15.521	17.862	53	142.824
CATALUÑA	692.229	38.920	227.149	131.941	2.881	1.093.120
EXTREMADURA	31.580	24.480	11.399	6.760	254	74.473
GALICIA	180.801	30.320	25.628	38.720	58.676	334.145
ISLAS BALEARES	20.678	1.615	3.096	2.269	117	27.775
LA RIOJA	12.671	808	2.245	1.346	100	17.170
MADRID	115.365	14.339	7.945	55.189	6.871	199.709
P. ASTURIAS	34.153	8.197	5.697	10.654	6.337	65.038
REG. DE MURCIA	20.115	5.204	17.060	13.000	3.629	59.008
VALENCIANA	412.757	22.819	39.235	51.739	81.848	608.398
TOTALES	2.596.838	314.530	605.058	490.218	174.319	4.180.963

Como se observa, la financiación básica supone un 62% del total, destacando Baleares (74%) y La Rioja (74%).

En lo que se refiere a la financiación de solidaridad destaca Extremadura con un 33%.

En financiación complementaria las Comunidades de Murcia y Cataluña alcanzan los porcentajes más elevados, con un 29 y 21%, respectivamente.

En financiación propia son Cantabria y Madrid con un 31 y 28%, respectivamente, en donde esta financiación tiene mayor importancia, debido fundamentalmente a las operaciones de crédito.

Como otros recursos, se incluyen indebidamente en presupuestos en algunas Comunidades los recursos transferidos por el Estado a las Corporaciones Locales, cuya crítica se ha expuesto en cada uno de los informes territoriales, y en el apartado I.4 de este informe.

Este defecto destaca en Galicia (18%) y Comunidad Valenciana (14%). También se incluyen estos recursos como ingresos presupuestarios (aunque no figuran en los datos del cuadro anterior al haberse ajustado) en las Comunidades de Castilla-La Mancha (29%) y Cantabria (13%).

A) Financiación Básica

El detalle de este grupo de financiación en el que los recursos transferidos por el Estado suponen el 38% del total, es el que se expone a continuación:

(En millones de pesetas)

Comunidades	Recursos Transferidos por el Estado	Tributos cedidos por el Estado	Tasas afectas a Servicios Transferidos	Recursos Transferidos por la Seg. Soc.	Total
ANDALUCÍA	315.652	106.986	—	353.596	776.234
ARAGÓN	12.004	26.537	1.114	—	39.655
CANARIAS	79.467	27.408	3.090	2.093	112.058
CANTABRIA	5.709	8.781	506	—	14.996
C.- LA MANCHA	30.749	18.734	2.361	—	51.844
C. Y LEÓN	42.433	36.195	3.074	—	81.702
CATALUÑA	169.038	183.521	4.039	335.631	692.229
EXTREMADURA	21.502	10.078	—	—	31.580
GALICIA	136.747	36.639	3.114	4.301	180.801
ISLAS BALEARES	1.817	16.971	1.890	—	20.678
LA RIOJA	6.288	6.019	364	—	12.671
MADRID	41.925	73.391	49	—	115.365
P. DE ASTURIAS	16.272	16.133	1.748	—	34.153
REG. DE MURCIA	4.611	14.620	884	—	20.115
VALENCIANA	108.023	87.783	5.959	210.992	412.757
TOTAL	992.237	669.796	28.192	906.613	2.596.838

En el año 1990 se encuentra cedida la gestión de tributos en todas las Comunidades, menos en Madrid, en la que no se ha producido el traspaso de la gestión recaudatoria. Estos ingresos alcanzan el 26% de la financiación básica y comprenden los impuestos y tasas que se incluyen en el cuadro siguiente:

(En millones de pesetas)

Comunidades	Impuesto Patrim.	Impuesto Sucesiones	Impuesto ITP y AJD	Impuesto s/Lujo	Tasa sobre Juego	Otros	Recargos Cobrados	TOTAL
ANDALUCÍA (*)	8.611	9.705	60.277	32	28.345	—	—	106.970
ARAGÓN	3.832	3.580	10.895	19	8.211	—	—	26.537
CANARIAS	1.649	1.262	13.851	—	10.646	—	—	27.408
CANTABRIA	1.824	1.847	5.093	17	—	—	—	8.781
C.-LA MANCHA	827	2.334	10.296	—	5.276	1	—	18.734
C. Y LEÓN	4.162	4.469	16.594	96	10.874	—	—	36.195
CATALUÑA	34.298	22.201	92.293	273	34.456	—	—	183.521
EXTREMADURA	642	1.255	4.537	—	3.158	1	485	10.078
GALICIA	3.940	3.829	16.980	50	11.841	—	—	36.639
I. BALEARES	1.728	1.801	13.424	18	—	—	—	16.971
LA RIOJA	893	598	3.130	—	1.398	—	—	6.019
MADRID	—	14.050	54.341	—	—	—	—	73.391
P.ASTURIAS	1.181	1.649	8.022	1	5.231	—	—	16.133
R.DE MURCIA	873	1.379	8.253	1	4.115	—	—	14.620
VALENCIANA	10.799	7.537	43.590	18	26.820	—	—	87.783
TOTALES	75.258	77.363	365.576	525	150.371	2	485	669.780

(*) Datos obtenidos de la cuenta de tributos cedidos.

Como se observa existe una diferencia de 16 millones de pesetas en Andalucía, al no coincidir los datos obtenidos de su contabilidad con los incluidos en la cuenta de gestión de tributos cedidos remitida a la Intervención General de la Administración del Estado, hecho que se producía también en el ejercicio anterior.

Corresponde al Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el mayor peso (55%) de los ingresos totales por tributos cedidos.

Las tasas afectas a servicios transferidos suponen un 1% de la financiación básica y comprenden aquellas tasas relacionadas con los servicios públicos transferidos, cuya recaudación fue cedida, y las de nueva creación.

Conviene destacar que los ingresos correspondientes a las transferencias del Estado para los sistemas de Seguridad Social (Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana) no deberían incluirse en los presupuestos de ingresos y gastos de la Administración General que analizamos y que deberían tratarse como operaciones extrapresupuestarias en tránsito a otros presupuestos de la Administración Institucional.

B) Financiación de solidaridad

Este bloque contiene tres instrumentos redistributivos de la financiación cuya finalidad es la de corregir los desequilibrios interterritoriales. Por una parte los existentes en el ejercicio anterior que comprenden las transferencias del Estado a través de la Sección 33 de los Presupuestos Generales, correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) (62% de este grupo de financiación), y las transferencias con cargo a los Fondos Estructurales de la Comunidad Económica Europea, concretamente, Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) (20%), y por otra parte, la compensación transitoria procedente del Estado (Sección 33 de los P.G.E.), establecida con carácter provisional para los ejercicios 1990 y 1991, por Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en tanto no fuera revisado el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, otorgando a dicha Compensación la naturaleza de financiación incondicionada (18%).

Supone aproximadamente un 8% del total financiación según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Comunidades	F.C.I.	Compensación Transitoria	Fondos Transf. por la C.E.E.	Total
ANDALUCÍA	63.478	18.194	13.961	95.633
ARAGÓN	—	4.536	288	4.824
CANARIAS	14.038	—	6.194	20.232
CANTABRIA	1.790	261	47	2.098
CASTILLA-LA MANCHA	7.876	4.413	5.066	17.355
CASTILLA Y LEÓN	8.363	10.330	8.993	27.686
CATALUÑA	31.296	—	7.624	38.920
EXTREMADURA	20.379	4.101	—	24.480
GALICIA	23.671	—	6.649	30.320
ISLAS BALEARES	—	1.613	2	1.615
LA RIOJA	541	—	267	808
MADRID	—	12.065	2.274	14.339
PRINC.DE ASTURIAS	4.316	—	3.881	8.197
REGIÓN DE MURCIA	4.680	499	25	5.204
VALENCIANA	14.621	—	8.198	22.819
TOTAL	195.049	56.012	63.469	314.530

C) Financiación complementaria

Constituye este grupo, un 14% de la financiación total, y está formado por los recursos que se indican en el cuadro siguiente:

(En millones de pesetas)

Comunidades	Contratos Programas	Subvenciones Gestionadas	Convenios de Inversión	Recursos Locales Propios	Total
ANDALUCÍA	—	211.726	—	—	211.726
ARAGÓN	—	5.016	—	—	5.016
CANARIAS	—	13.212	1.271	—	14.483
CANTABRIA	—	1.640	—	4.692	6.332
C.-LA MANCHA	—	11.095	1.431	—	12.526
C. Y LEÓN	—	10.572	—	4.949	15.521
CATALUÑA	—	227.149	—	—	227.149
EXTREMADURA	—	11.399	—	—	11.399
GALICIA	—	24.118	—	1.510	25.628
ISLAS BALEARES	—	3.096	—	—	3.096
LA RIOJA	—	370	945	930	2.245
MADRID	—	—	5.486	2.459	7.945
P. DE ASTURIAS	—	4.319	—	1.378	5.697
R. DE MURCIA	—	7.902	—	9.158	17.060
VALENCIANA	239	38.494	502	—	39.235
TOTAL	239	570.108	9.635	25.076	605.058

Como se puede observar en el cuadro, el mayor peso específico en este grupo de financiación corresponde a las citadas subvenciones gestionadas con un 94%.

D) Financiación propia

Esta agrupación supone un 12% de la financiación total según el detalle siguiente:

(En millones de pesetas)

Comunidades	Recursos Propios Tributarios	Operaciones Financieras	Recursos Patrimoniales	Total
ANDALUCÍA	1.711	78.595	6.880	87.186
ARAGÓN	—	2.000	3.681	5.681
CANARIAS	17.942	25.320	3.967	47.229
CANTABRIA	233	11.547	446	12.226
CASTILLA-LA MANCHA	509	3.136	4.771	8.416
CASTILLA Y LEÓN	—	13.827	4.035	17.862
CATALUÑA	11.440	119.318	1.183	131.941
EXTREMADURA	2.433	3.100	1.227	6.760
GALICIA	—	36.996	1.724	38.720
ISLAS BALEARES	—	2.000	269	2.269
LA RIOJA	51	1.180	115	1.346
MADRID	6.546	46.082	2.561	55.189
PRINCIPADO DE ASTURIAS	529	9.240	885	10.654
REGIÓN DE MURCIA	753	11.738	509	13.000
VALENCIANA	3.580	45.652	2.507	51.739
TOTAL	45.727	409.731	34.760	490.218

El mayor peso en este grupo de financiación corresponde a las operaciones financieras, que incluyen la financiación obtenida por préstamos a corto, medio y largo plazo, empréstitos, fianzas depositadas y reembolsos de anticipos, con un 84%. Del resto, corresponden a recursos patrimoniales los ingresos derivados de sus depósitos en efectivo y a recursos propios tributarios (tasa especial sobre los juegos de azar en Cataluña y la exacción sobre la gasolina en Canarias).

I.3.2.- ENDEUDAMIENTO

El endeudamiento vivo al cierre del ejercicio según las cuentas rendidas asciende a 856.089 millones de pesetas, incrementándose en 260.797 millones de pesetas con respecto al ejercicio anterior. De este aumento neto, un 68% corresponde a sólo cuatro Comunidades: Andalucía (69.684), Madrid (41.615), Galicia (38.695) y Cataluña (27.414).

El endeudamiento por empréstitos al cierre del ejercicio importa 233.374 millones de pesetas según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Comunidades	Pendiente de Amortización 1/1/90	Suscripciones	Amortizaciones	Pendiente de Amortizar 31/12/90
ANDALUCÍA	32.396	—	6.730	25.666
ARAGÓN	6.000	—	500	5.500
CANARIAS	18.325	—	625	17.700
CANTABRIA	—	1.997	—	1.997
C.-LA MANCHA	2.600	4.900	200	7.300
CASTILLA Y LEÓN	6.901	5.000	2.567	9.334
CATALUÑA	35.289	6.000	7.232	34.057
EXTREMADURA	1.720	—	280	1.440
FORAL DE NAVARRA	502	—	502	—
GALICIA	7.875	—	3.305	4.570
ISLAS BALEARES	1.875	—	525	1.350
LA RIOJA	274	—	57	217
MADRID	10.000	—	—	10.000
PAÍS VASCO	67.322	35.100	9.123	93.299
P. DE ASTURIAS	3.305	—	746	2.559
REGIÓN DE MURCIA	3.005	—	305	2.700
VALENCIANA	21.727	—	6.042	15.685
TOTAL	219.116	52.997	38.739	233.374

En cuanto a préstamos, es de destacar especialmente la práctica extendida en algunas Comunidades de reconocer derechos presupuestarios por la simple autorización legislativa de endeudamiento o por la formalización de los préstamos, sin que exista orden de disposición. Es criterio de este Tribunal que no deben reconocerse derechos por préstamos hasta que se exija su

efectiva disposición dentro del ejercicio presupuestario, como consecuencia de la ejecución de los contratos financieros, simultánea o previamente concertados.

Lo anterior, conectado con la irregularidad, también observada, de utilización tardía de las autorizaciones presupuestarias para estas financiaciones exteriores supone , la alteración de las cifras contables del endeudamiento vivo.

El volumen de endeudamiento por préstamos a medio y largo plazo importa 622.715 millones de pesetas. El detalle es el siguiente:

(En millones de pesetas)

COMUNIDADES	Pendiente de Amortización 1/1/90	Disposiciones	Amortizaciones	Pendiente de Amortización 31/12/90
ANDALUCÍA	67.112	77.000	586	143.526
ARAGÓN	1.800	2.000	180	3.620
CANARIAS	5.598	3.750	415	8.933
CANTABRIA	31.151	9.555	282	40.424
C.-LA MANCHA	2.500	3.000	71	5.429
CASTILLA Y LEÓN	528	7.100	107	7.521
CATALUÑA	125.600	34.000	5.354	154.246
EXTREMADURA	—	3.100	—	3.100
F. DE NAVARRA	1.637	—	156	1.481
GALICIA	7.000	37.000	—	44.000
ISLAS BALEARES	2.862	2.000	63	4.799
LA RIOJA	3.982	1.180	148	5.014
MADRID	69.923	42.331	716	111.538
PAÍS VASCO	—	—	—	—
P. DE ASTURIAS	9.484	9.240	463	18.261
REGIÓN DE MURCIA	25.563	11.738	6.628	30.673
VALENCIANA	22.513	18.461	824	40.150
TOTAL	377.253	261.455	15.993	622.715

Las Comunidades con endeudamiento más alto son, pues, Cataluña (188.303), Andalucía (169.192), Madrid, (121.538) y País Vasco (93.299).

A continuación se especifica la carga financiera correspondiente a este endeudamiento para inversiones referida a las Administraciones Públicas, (Administración General y Organismos autónomos), salvo Andalucía, Canarias, Cataluña, Navarra, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana que está referida exclusivamente a la Administración General, al no disponerse de datos en los Informes de sus Órganos de Control Externo. Como puede observarse en el estado adjunto, se respeta el límite del 25% sobre los ingresos corrientes previstos en el art. 14.2.b de la LOFCA. La carga financiera real no difiere prácticamente de la inicialmente prevista.

(En millones de pesetas y %)

COMUNIDADES	(1) Anualidad	Ingresos corrientes		Carga financiera	
		(2) Previsiones Iniciales	(3) Derechos Reconocidos	(4) s/Prev.Inic. (1)*100/(2)	(5) s/Dere.Rec. (1)*100/(3)
ANDALUCÍA	22.489	1.020.283	1.025.769	2	2
ARAGÓN	1.619	41.455	47.003	4	3
CANARIAS	3.752	143.794	171.501	3	2
CANTABRIA	4.874	34.963	32.401	14	15
C.-LA MANCHA	1.640	56.984	64.060	3	3
C. Y LEÓN	3.945	80.991	96.225	5	4
CATALUÑA	35.940	90.348	928.715	4	4
EXTREMADURA	588	38.787	41.839	2	1
F. DE NAVARRA	749	101.357	181.974	1	0
GALICIA	6.726	262.980	263.563	3	3
ISLAS BALEARES	1.252	18.159	22.844	7	5
LA RIOJA	769	12.772	14.429	6	5
MADRID	14.216	188.131	180.135	8	8
PAÍS VASCO	17.975	360.090	371.441	5	5
P. DE ASTURIAS	3.219	41.272	40.844	8	8
REG.DE MURCIA	4.980	35.083	36.098	14	14
VALENCIANA	13.613	499.679	533.099	3	3
TOTAL	129.494	3.837.128	4.051.940	3	3

El índice medio que es del 3%, no ha variado respecto al ejercicio anterior, a pesar del fuerte incremento del endeudamiento (44%).

I.3.3.- AVALES

La situación de los avales concedidos por las Comunidades Autónomas con las limitaciones que se indican, es la que se incluye a continuación:

(En millones de pesetas)

COMUNIDADES	Número de Avales	Existencias Iniciales	Formalizaciones	Cancelados		Exist. Finales
				Liberados	No Liberados	
ANDALUCIA	—	—	1.177	—	—	—
ARAGÓN	39	790	523	28	—	1.285
CANARIAS	32	2.228	465	232	256	2.205
CANTABRIA	26	1.419	280	155	—	1.544
CASTILLA-LA MANCHA	—	—	—	—	—	—
CASTILLA Y LEON	19	692	117	91	85	633
CATALUÑA	142	57.463	14.128	7.388	—	64.203
EXTREMADURA	84	2.186	132	56	1.226	916
FORAL DE NAVARRA	—	—	—	—	—	—
GALICIA	1	37	—	—	37	—
ISLAS BALEARES	5	650	2.638	400	—	2.888
LA RIOJA	—	—	—	—	—	—
MADRID	4	21.160	13.580	—	—	34.660
PAÍS VASCO	—	21.508	129	—	—	—
PRINCIP DE ASTURIAS	597	2.947	53	86	—	2.914
REGIÓN DE MURCIA	1	65	—	—	—	65
VALENCIANA	20	11.727	3.050	—	—	16.777
TOTAL	970	126.756	36.192	8.436	1.602	128.890

Los correspondientes a Andalucía son gestionados por el Instituto de Fomento de Andalucía (entidad de Derecho Público) y su sociedad participada SOPREA, S.A.

Hay que indicar que las cifras anteriores presentan numerosas limitaciones como consecuencia de la falta de documentación (Extremadura y Asturias), o de información en los informes elaborados por los Órganos de Control Externo (Andalucía, Navarra y País Vasco).

En Andalucía no se incluye información sobre los avales existentes en el ejercicio anterior, así como de los cancelados en el ejercicio. En Navarra no existe información alguna sobre los avales y en el País Vasco se carece de la correspondiente a los cancelados.

I.3.4.- RESULTADOS PRESUPUESTARIOS Y REMANENTE DE TESORERÍA

I.3.4.1.- Resultados rendidos

Los resultados por operaciones no financieras (caps. 1 a 7) que se derivan de los datos contables rendidos por las Comunidades, son los que se incluyen en el cuadro siguiente:

(En millones de pesetas)

COMUNIDADES	Derechos Reconocidos	Obligaciones Reconocidas	Resultados Presupuesto Corriente	Resultados Ptos. Cerrados	Resultados del Ejercicio
ANDALUCIA	1.130.099	1.268.677	(138.578)	(259)	(138.837)
ARAGÓN	54.559	61.042	(6.483)	(1.241)	(7.724)
CANARIAS	193.346	214.241	(20.895)	(1.036)	(21.931)
CANTABRIA	33.550	50.225	(16.675)	234	(16.441)
CASTILLA-LA MANCHA	123.463	112.848	10.615	(112)	10.503
CASTILLA Y LEON	128.999	134.160	(5.162)	(140)	(5.302)
CATALUÑA	974.538	995.593	(21.055)	(115)	(21.170)
EXTREMADURA	79.573	69.054	10.519	1.009	11.528
FORAL DE NAVARRA	186.524	145.908	40.616	(6.656)	33.960
GALICIA	297.355	337.320	(39.965)	(491)	(40.456)
ISLAS BALEARES	25.658	29.778	(4.120)	(88)	(4.208)
LA RIOJA	15.961	20.395	(4.434)	(251)	(4.685)
MADRID	152.215	196.874	(44.659)	(31)	(44.690)
PAÍS VASCO	391.513	419.641	(28.128)	3.409	(24.719)
PRINC. DE ASTURIAS	51.165	61.105	(9.940)	(1.497)	(11.437)
REGIÓN DE MURCIA	46.371	61.867	(15.494)	(249)	(15.743)
VALENCIANA	337.934	380.925	(42.991)	(4.992)	(47.983)
TOTAL	4.442.824	4.779.653	(336.829)	(12.506)	(349.335)

Como se puede observar sólo tres Comunidades presentan superávit en el ejercicio 1990. Por la cuantía del déficit destaca sobre todo Andalucía, seguida en menor medida por la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia.

Por lo que respecta a la importancia del déficit en relación con el importe de los derechos reconocidos por operaciones no financieras merece destacarse Cantabria (49%), Región de Murcia (34%), La Rioja (29%) y Madrid (29%).

I.3.4.2.- Resultados ajustados

A) Por operaciones no financieras

Los resultados por operaciones no financieras ajustados de acuerdo con el trabajo de fiscalización efectuado, bien por este Tribunal, bien por los Órganos de Control Externo una vez verificados según los criterios contables que considera adecuados este Tribunal, son los que se reflejan a continuación:

(En millones de pesetas)

COMUNIDADES	Resultados Contables del Ejercicio	Ajustes	Resultados del Ejercicio Ajustados
ANDALUCÍA	(138.837)	(34.313)	(173.150)
ARAGÓN	(7.724)	1.503	(6.221)
CANARIAS	(21.931)	---	(21.931)
CANTABRIA	(16.441)	599	(15.842)
CASTILLA-LA MANCHA	10.503	640	11.143
CASTILLA Y LEÓN	(5.302)	(95)	(5.397)
CATALUÑA	(21.170)	6.295	(14.875)
EXTREMADURA	11.528	(11.789)	(261)
FORAL DE NAVARRA	33.960	(717)	33.243
GALICIA	(40.456)	(323)	(40.779)
ISLAS BALEARES	(4.208)	---	(4.208)
LA RIOJA	(4.685)	(140)	(4.825)
MADRID	(44.690)	815	(43.875)
PAÍS VASCO	(24.719)	(444)	(25.163)
PRINCIP. DE ASTURIAS	(11.437)	989	(10.448)
REGIÓN DE MURCIA	(15.743)	539	(15.204)
VALENCIANA	(47.983)	5.448	(42.535)
TOTAL	(349.335)	(30.993)	(380.328)

Sólo dos Comunidades presentan superávit, Navarra y Castilla-La Mancha.

Atendiendo al déficit destacan por su cuantía o su importancia porcentual en relación con los derechos reconocidos en el ejercicio las mismas Comunidades mencionadas en el apartado anterior.

B) Remanente de tesorería

Los remanentes de tesorería a 31 de diciembre de 1990 (cap. 1 a 9) que se deducen de los datos contables rendidos por las Comunidades, así como los ajustados en virtud del trabajo realizado por este Tribunal y los Órganos de Control Externo son los que se detallan a continuación:

(En millones de pesetas)

COMUNIDADES	Remanente Tesorería Contable	Ajustes	Remanente Tesorería Ajustado
ANDALUCÍA	(5.961)	(110.807)	(116.768)
ARAGÓN	49.300	(33.193)	16.107
CANARIAS	36.501	(33.038)	3.463
CANTABRIA	1.995	155	2.150
CASTILLA-LA MANCHA	11.607	849	12.456
CASTILLA Y LEÓN	124.235	(96.790)	27.445
CATALUÑA	(136.897)	15.422	(121.475)
EXTREMADURA	15.495	(15.504)	(9)
FORAL DE NAVARRA	66.833	(257)	66.576
GALICIA	(20.968)	243	(20.725)
ISLAS BALEARES	12.380	(14.698)	(2.318)
LA RIOJA	7.302	(11.078)	(3.776)
MADRID	34.981	(75.061)	(40.080)
PAÍS VASCO	29.528	1.083	30.611
PRINCIP. DE ASTURIAS	14.659	(9.493)	5.166
REGIÓN DE MURCIA	5.607	(15.457)	(9.850)
VALENCIANA	124.981	(34.503)	90.478
TOTAL	371.578	(432.127)	(60.549)

Si bien el remanente de tesorería total según datos contables asciende a 371.578 millones de pesetas, teniendo en cuenta los ajustes derivados del trabajo de fiscalización, dicho importe queda convertido en un valor negativo, principalmente por el criterio erróneo seguido por la mayoría de las Comunidades al contabilizar como derechos las operaciones de endeudamiento no dispuestas.

Como puede observarse tienen remanente de tesorería negativo a 31 de diciembre de 1990 ocho Comunidades: Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja, Baleares y Extremadura, destacando las dos primeras. Presentan remanente positivo el resto de las Comunidades, de las que sobresalen C. Valenciana, Navarra, País Vasco y Castilla y León.

I.4.- SÍNTESIS DE LOS INFORMES TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES

ANDALUCÍA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

La rendición contable a la Cámara de Cuentas se ha efectuado dentro del plazo legalmente establecido en el art. 97.2 de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

No obstante, examinado su contenido se observa la ausencia de la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos así como la demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, a las que se refiere el art. 96 a) y b), respectivamente, de la citada Ley. Asimismo, no se ha rendido la cuenta de inmovilizado prevista en el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto de 5 de abril de 1988.

No existe un Plan General de Contabilidad de las administraciones públicas de la Comunidad. El sistema contable no permite cuantificar el grado de eficiencia y eficacia logrado en la gestión de los fondos públicos.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

Los presupuestos para 1990 fueron aprobados por Ley 2/1990, de 2 de febrero, con unas previsiones iniciales de 1.195.199 millones de pesetas.

2.1.1.- Modificaciones de crédito

Suponen un incremento neto del presupuesto de gastos de 182.743 millones de pesetas, un 15% sobre los créditos iniciales, destacando por su volumen las generaciones de crédito (88.305 millones) y las incorporaciones de crédito (77.727 millones).

Las modificaciones del presupuesto de ingresos ascendieron a 166.032 millones, con un menor importe sobre las de gastos de 16.711 millones, correspondientes a las ampliaciones de crédito. Por otra parte esta figura modificativa ha registrado un significativo incremento respecto del ejercicio precedente.

El art. 6.2 de la Ley 6/1990, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad para 1991, preceptúa la mención expresa a la fuente de financiación como requisito para la tramitación de las ampliaciones de crédito, lo que evitará en lo sucesivo el defecto de no especificar la citada fuente. Asimismo se ha observado la financiación con cargo al remanente de tesorería del propio ejercicio.

Las incorporaciones aprobadas al amparo del art. 40.2.b) de la Ley de Hacienda, adolecen de los siguientes defectos generales: se produce un gran número de documentos de fase "D" en el entorno de la fecha límite de 30 de noviembre, en ocasiones se incorporan créditos no comprometidos correspondientes a gastos corrientes y la justificación de la necesidad de la modificación es insuficiente.

Dentro de las generaciones de crédito por ingresos figuran (indebidamente) las financiadas con remanente de tesorería por importe de 7.896 millones de pesetas, de los que 1.732 millones de pesetas lo están ficticiamente según se desprende de la Cuenta General del ejercicio anterior.

Se han aprobado transferencias que minoraban créditos previamente incrementados por otras transferencias. También se han transferido a otras aplicaciones créditos incorporados por importe de 2.069 millones de pesetas.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto de gastos

Se han detectado diversas anomalías en la gestión de los gastos de personal: ausencia de la debida sistematización en la confección de las nóminas de incidencias, defectos en la actualización del Registro General de Personal, retrasos e insuficiente rigor en la documentación justificativa en la confección de las nóminas.

En la ejecución del cap. 2-Gastos en bienes corrientes y servicios, las anomalías detectadas son fundamentalmente las siguientes: no depósito de las garantías y fianzas prescritas por el Reglamento General de Contratación para los contratos de suministros, fraccionamiento de gastos con la finalidad de considerarlos suministros menores y sustituir el pliego de bases por una simple propuesta de adquisición razonada, ausencia del certificado de inclusión en inventario prescrito por el art. 25 del Reglamento de

Intervención de la Junta de Andalucía y tramitación de expedientes de gasto con posterioridad a la prestación del servicio.

No se realiza un seguimiento adecuado de las subvenciones concedidas y se han detectado solicitudes con fecha posterior a la de concesión.

Las anomalías detectadas en la contratación administrativa en ejecución de inversiones se sintetizan en: frecuentes modificaciones del contrato inicial, tanto por reformados como por obras complementarias, utilización excesiva del sistema de adjudicación directa, escaso rigor en la publicación de las adjudicaciones definitivas e insuficiente acreditación de los requisitos de capacidad de los contratistas.

2.1.3.- Ejecución del presupuesto de ingresos

Se incluyen indebidamente en los presupuestos de la Administración General los ingresos y gastos por las transferencias del Estado destinadas al Organismo autónomo Servicio Andaluz de Salud. Aquéllos importan 382.002 millones de pesetas.

En el cap. 4, se reconocen 4.300 millones de pesetas por anticipo de la liquidación de la participación en los ingresos del Estado del propio ejercicio que ya figuraban reconocidos y recaudados en otro concepto. Asimismo figuran reconocidos en el ejercicio 15.101 millones de pesetas por la liquidación definitiva que se dotan en los Presupuestos Generales del Estado de 1991. Por otra parte, de los derechos reconocidos por liquidación del INSALUD, 28.406 millones de pesetas han sido anulados en el ejercicio siguiente. Asimismo, en el ejercicio anterior se reconocieron 13.494 millones por participación en ingresos del Estado que corresponde imputar al ejercicio corriente.

Se han reconocido indebidamente derechos en el cap. 9, por importe de 63.000 millones de pesetas, por la incorrecta práctica de contraer las meras autorizaciones de endeudamiento aprobadas en las leyes de presupuestos. Figuraban indebidamente reconocidos en el ejercicio anterior 50.000 millones de pesetas que corresponden a operaciones dispuestas en este ejercicio.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

No existe un Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta debidamente valorado y autorizado, según preceptúa el art. 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En lo que se refiere a la tesorería, se han detectado deficiencias en materia de conciliaciones bancarias, existencia de cuentas bancarias de disposición no mancomunada y un gran número que no figuran en el Registro de la Tesorería.

2.2.2.- Cuentas de resultados

El déficit no financiero del ejercicio asciende a 138.578 millones que, adicionando los resultados por modificaciones de ejercicios anteriores, que suponen un déficit de 259 millones, arrojan un déficit total de 138.837 millones, que debe corregirse, por efecto de los ajustes 1 a 4, que suponen una disminución de 34.313 millones.

El remanente de tesorería según datos contables asciende a -5.961 millones de pesetas que debe ajustarse, según se detalla a continuación, minorándose en 110.807 millones.

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados ejercicio corriente	Total
1. Derechos duplicados por participación en los ingresos del Estado	—	(4.300)	(4.300)
2. Derechos por PIE reconocidos en 1989 e imputables a 1990	(13.494)	13.494	—
3. Derechos por PIE reconocidos indebidamente en 1990	—	(15.101)	(15.101)
4. Derechos indebidamente reconocidos por anticipo de la liquidación INSALUD	—	(28.406)	(28.406)
5. Derechos reconocidos en ejercicios anteriores por operaciones de endeudamiento dispuestas en 1990	(50.000)	50.000	—
6. Derechos reconocidos en el ejercicio, de operaciones de crédito no formalizadas	—	(63.000)	(63.000)
TOTAL	(63.494)	(47.313)	(110.807)

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los diez Organismos que integran el subsector son de carácter administrativo.

3.1.- EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Su presupuesto final alcanza 432.330 millones de pesetas.

Se han detectado obligaciones , no reconocidas en cuentas, sin dotación presupuestaria, por 77.897 millones de pesetas. Los ingresos reconocidos son inferiores en 19.774 millones de pesetas a las previsiones. De esta forma, se originan tensiones de tesorería que dan lugar a plazos de pago a terceros muy superiores a los de mercado, con su consiguiente repercusión de costes financieros.

Asimismo se observan deficiencias en relación con el control interno de los circuitos de ingresos y gastos, así como de la gestión de los inventarios de existencias.

No dispone el Organismo de un Plan de Contabilidad que refleje la totalidad de los hechos económicos y patrimoniales.

3.2.- RESTANTES ORGANISMOS

El Patronato de la Alhambra y Generalife, así como el Instituto Andaluz de Servicios Sociales no han atendido las solicitudes de información realizadas por la Cámara de Cuentas.

No se han elaborado las Memorias justificativas de costo y rendimiento de los Servicios públicos y demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

Se ha detectado la inexistencia, en general, de un procedimiento de control de entrada y salida de documentos en los departamentos de Gestión Económica. Asimismo se observan deficiencias de los sistemas de archivo y documentación en el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, el Instituto Andaluz de Salud Mental y el Patronato de la Alhambra y Generalife.

No se dispone de inventarios de bienes en el Instituto Andaluz de Administración Pública, ni en el Instituto Andaluz de Servicios Sociales, así como en las Delegaciones provinciales del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

Como norma general se utiliza el criterio del reconocimiento de los derechos simultáneamente a su cobro, lo que da lugar a la existencia de derechos no reconocidos en cuentas. Por el contrario, los correspondientes a transferencias de la Administración General se reconocen por el mismo importe por el que figuran consignados en los presupuestos del Organismo, por lo que presentan un exceso de 1.696 millones de pesetas en el conjunto del subsector para el presupuesto corriente.

En materia de modificaciones presupuestarias se han puesto de manifiesto diversas anomalías en relación con la calificación de los tipos modificativos que no se corresponden con su normativa.

Se observan deficiencias en la formalización y cumplimentación de contratos, así como de la documentación presentada por los adjudicatarios, especialmente en el caso del Patronato de la Alhambra y Generalife.

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

El subsector está constituido por 28 entidades. Tres de ellas son Entes Públicos:

- Instituto de Fomento de Andalucía, que a través de la "Sociedad para la promoción y reconversión económica de Andalucía, S.A.", participa en otras 13 sociedades.
- Empresa Pública del Suelo de Andalucía, que participa en tres empresas, dos de ellas asimismo participadas por el Instituto de Fomento de Andalucía.
- Empresa Pública de la Radio y la Televisión de Andalucía, que participa en dos sociedades.

El resto de las sociedades forman parte de la cartera de la Administración General o de los Organismos autónomos "Instituto Andaluz de Reforma Agraria" y "Agencia del Medio Ambiente".

Durante el ejercicio han causado baja dos entidades y se han constituido otras siete.

La Cuenta General no recoge los estados anuales de diez Empresas Públicas.

Sólo se han elaborado PAIF en diez entidades siendo, no obstante, incompletos. Tampoco se recogen en los presupuestos la totalidad de los de explotación y capital.

Se encuentran incursas en el supuesto previsto en el art. 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas como causa de disolución las siguientes sociedades:

- La Alpujarreña, S.A.
- Manufacturas Damma, S.A.
- Fomento Empresarial, S.A.

Se han detectado diversas deficiencias en relación con la adaptación de las cuentas anuales a la nueva regulación mercantil, tales como ausencia de memoria, de informe de gestión o de informe de auditoría. Asimismo, numerosas empresas aún no han adaptado sus Estatutos sociales.

ARAGÓN

1.- OBSERVACIONES GENERALES

- La Cuenta General de la Comunidad, correspondiente al ejercicio de 1990, se remitió a este Tribunal con fecha 23 de enero de 1992, con una demora próxima a los 3 meses respecto al plazo establecido en el art. 35 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

- En relación con la Cuenta de la Administración General, no se ha rendido la siguiente documentación que determina el art. 81 de la Ley de Hacienda: Estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a los ejercicios futuros, con detalle de los ejercicios afectados; Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos; Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

- No se rinden de forma independiente las cuentas de los Organismos autónomos de la Comunidad, los cuales funcionan como un servicio más dentro del respectivo Departamento de la Diputación General al que están adscritos. Estos son el "Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón" (ISVA), de carácter comercial y financiero, y el "Servicio Aragonés de la Salud", de carácter administrativo.

- Las Empresas públicas han rendido las cuentas el 20 de julio de 1992, fuera del plazo fijado en el art. 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

No se han emitido los informes correspondientes al control financiero de las empresas de la Comunidad, según viene establecido por la legislación aplicable.

La sociedad "Desarrollo Comercial Puente de Santiago, S.A.", se mantiene pendiente de liquidación desde 1987.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Al no aplicarse el Plan General de Contabilidad Pública, no existe un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestaria.

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o sistemas de seguimiento y control susceptibles de valoración monetaria.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

En las modificaciones presupuestarias, que han supuesto un aumento de los créditos inicialmente aprobados de 43.575 millones de pesetas (incremento del 72% sobre los créditos iniciales), se observa lo siguiente:

Existe una falta de cobertura en la financiación de las modificaciones presupuestarias de 5.560 millones de pesetas.

En las incorporaciones de crédito, diversos expedientes incumplen lo preceptuado por los arts. 43.3 de la Ley de Hacienda y 8.1 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 1990, al incorporarse al ejercicio fiscalizado remanentes de crédito, por importe de 647 millones de pesetas, provenientes a su vez de incorporaciones efectuadas en 1989.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

- Existen algunos programas de gasto en el ejercicio con bajo cumplimiento, destacando en este sentido el programa 431.1 "Promoción y administración de viviendas", del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, con un remanente de 4.912 millones de pesetas, que representa el 63% del crédito final y el programa 751.1 "Ordenación, promoción y fomento del turismo", cuyo remanente de 3.257 millones de pesetas representa el 67% del crédito final.

- En la liquidación del presupuesto de gastos, figuran 2.594 millones de pesetas pendientes de pago a 31 de diciembre de 1990. Sin embargo, esta cifra debe incrementarse en 5.303 millones de pesetas por los documentos contabilizados presupuestariamente y pendientes de cargo a Tesorería, con lo que las obligaciones realmente pendientes de pago al final del ejercicio ascienden a 7.897 millones de pesetas.

- Los derechos reconocidos en la liquidación del presupuesto de ingresos de la Comunidad deberían reducirse en 23.216 millones de pesetas, importe resultante de las siguientes rectificaciones:

Incremento de 204 millones de pesetas, respecto de la participación en los ingresos del Estado, para alcanzar el importe consignado en los Presupuestos Generales del Estado de 1990.

Minoración de 25.420 millones de pesetas, al no corresponderse con operaciones de crédito efectivamente dispuestas e, incluso, no formalizadas en el ejercicio.

Aumento en 2.000 millones de pesetas, correspondientes al importe dispuesto en 1990 de la operación de crédito concertada con el Banco Europeo de Inversiones en 1988.

Se han anulado derechos reconocidos indebidamente en el ejercicio anterior por 1.299 millones de pesetas de Participación de Ingresos del Estado y que afectan negativamente al resultado del ejercicio presente.

- De la contratación administrativa se destaca:

En cinco grupos de expedientes correspondientes, cada uno de ellos, a varios contratos de obras realizadas en una misma carretera, en puntos kilométricos contiguos, cuya adjudicación y ejecución fue simultánea o sucesiva, no constan, ni se han aportado previa petición expresa de este Tribunal, las correspondientes autorizaciones, debidamente motivadas, por las que se hubiera permitido el fraccionamiento de una obra total -la correspondiente a cada carretera- en proyectos independientes para cada una de sus partes, autorizaciones preceptivas a tenor de los arts. 21 de la L.C.E. y 59 de su Reglamento.

El 84% del importe total de los contratos de obras fiscalizados se ha adjudicado mediante concurso, sin que se haya acreditado la existencia de circunstancias concretas que pudieran justificar tal procedimiento. En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se fijan criterios genéricos sin ordenación de su importancia.

- Se han producido retrasos sin que se haya acreditado la concesión de prórrogas o declaración de suspensión de las respectivas obras en la ejecución de al menos 14 contratos, destacándose uno cuya duración ha excedido de un año, teniendo en cuenta además que en este caso el contratista ofreció ejecutar las obras en un plazo inferior al previsto en el Proyecto y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Respecto de cinco contratos, no obstante haberse recibido los documentos acreditativos de la concesión de prórrogas, no están motivadas y, además, en dos de éstos resulta de la documentación remitida que la concesión de las prórrogas se realizó con posterioridad al plazo de ejecución de los respectivos contratos (art. 140.2º del Reglamento General de Contratación).

2.1.3.- Presupuestos cerrados

En las operaciones de presupuestos cerrados, figuran pendientes de cobro operaciones de crédito por importe de 7.427 millones de pesetas, que procede dar de baja por no haber sido dispuestas.

2.1.4.- Operaciones extrapresupuestarias

En la agrupación de deudores extrapresupuestarios, el concepto "Anticipo Cortes de Aragón" mantiene un saldo de 753 millones de pesetas pendiente de formalización presupuestaria desde 1985.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

- Determinadas cuentas bancarias como las de pagos a justificar y restringidas de recaudación, con un saldo al final del ejercicio de 751 millones de pesetas, deben ser objeto de inclusión en la tesorería de la Comunidad.

Del análisis del endeudamiento por plazo superior a un año que sirve de cobertura a los gastos de inversión, se deduce que el endeudamiento utilizable para 1991 asciende en principio a 25.420 millones de pesetas, y no a la cifra pendiente de cobro por este concepto (32.847 millones), dado que deben considerarse caducadas las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

Se encuentran pendientes de cancelar tres avales otorgados por la Comunidad, por importe global de 44 millones de pesetas, que no fueron pagados por los avalados en sus vencimientos anteriores a 1990.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

- El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps. 1 a 7) derivado de la liquidación presupuestaria presenta un déficit de 7.724 millones de pesetas.

No obstante, dicho déficit debe disminuirse en 1.503 millones de pesetas según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	TOTAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
Participación en los ingresos del Estado	(550)	204	(346)
Anulación de derechos por participación en los Ingresos del Estado	(1.299)	1.299	—
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	(1.849)	1.503	(346)
OPERACIONES FINANCIERAS			
Derechos reconocidos indebidamente por operaciones de endeudamiento no dispuestas	—	(25.420)	(25.420)
Derechos reconocidos en ejercicios anteriores por operaciones de endeudamiento dispuestas en el ejercicio	(2.000)	2.000	—
Derechos reconocidos en ejercicios anteriores por operaciones de endeudamiento no dispuestas	(7.427)	—	(7.427)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	(9.427)	(23.420)	(32.847)
TOTAL AJUSTES	(11.276)	(21.917)	(33.193)

Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 6.221 millones de pesetas, inferior al previsto en sus presupuestos (49.450 millones). Dicha diferencia se debe básicamente a la falta de ejecución de las operaciones de capital.

- El remanente de tesorería al final del ejercicio, según las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 49.300 millones de pesetas. Dicho remanente debe disminuirse en 33.193 millones, según se indica en el cuadro anterior, presentando un saldo al 31 de diciembre de 1990 de 16.107 millones de pesetas.

CANARIAS

1.- OBSERVACIONES GENERALES

La Cuenta General ha sido rendida dentro del plazo máximo establecido por la Ley 4/1989, si bien se observa la ausencia de la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

La organización contable de la Comunidad se establece en el Decreto 40/1987, desarrollado por Orden de 17 de diciembre del mismo año que aprueba la Instrucción de Contabilidad Presupuestaria del Gasto Público. Aunque el citado Decreto tiene por finalidad la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, durante el año 1990 ha continuado llevándose la contabilidad principal por el sistema administrativo-presupuestario de partida simple.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Presupuesto corriente

Los presupuestos para 1990 fueron aprobados por Ley 14/1989 de 26 de diciembre, alcanzando los estados de ingresos y gastos un importe inicial de 193.920 millones de pesetas.

Modificaciones de crédito

Han supuesto un incremento neto de 66.302 millones de pesetas. Las modificaciones del presupuesto de ingresos han ascendido a 64.789 millones, por lo que no se ha mantenido el equilibrio en el presupuesto final, correspondiendo la diferencia, 1.513 millones, a ampliaciones de crédito.

Destacan, por su volumen las ampliaciones de crédito (25.257 millones), de las que 22.959 millones corresponden al pago a entes locales de los arbitrios insulares, práctica inadecuada según se comenta en el subepígrafe 2.2.1.3.

Se ha detectado la incorporación de créditos en cap. 1 por 287 millones de pesetas, práctica que contraviene el apartado sexto de la Orden de la Consejería de Hacienda de 31 de enero de 1990.

Ejecución del presupuesto de gastos

En la gestión del cap. 1 se ha observado el incumplimiento de los plazos fijados en la normativa reguladora de la gestión de nóminas, así como la inexistencia de modelos y procedimientos normalizados para la documentación de las incidencias.

En lo que se refiere a los gastos de cap. 2 se han detectado diversas anomalías entre las que cabe destacar el exceso de la contratación directa y por motivos de urgencia, el fraccionamiento de expedientes con la finalidad de considerarlos suministros menores, inadecuadas aplicaciones presupuestarias, así como el excesivo uso de la expedición de fondos a justificar y el incumplimiento de los plazos de justificación.

En cap. 6 se observa el predominio de la contratación directa como forma de adjudicación, produciéndose diversas irregularidades en su tramitación, así como la inexistencia de un procedimiento que permita inventariar adecuadamente las adquisiciones.

Por último se ha detectado un excesivo uso del procedimiento de convalidación por el Consejo de Gobierno, que ha afectado a 164 expedientes de gasto en los que, en diversos casos, se habían omitido trámites esenciales.

Ejecución del presupuesto de ingresos

Se incluyen indebidamente en el presupuesto los ingresos y gastos correspondientes a tributos locales del Régimen Económico Fiscal, cuya recaudación ha ascendido a 24.321 millones de pesetas.

Con referencia al cap. 9 se observa que durante el ejercicio se ha producido la disposición de 3.750 millones de pesetas correspondientes a una operación con el Banco de Crédito Local que ya figuraba indebidamente reconocida en el ejercicio anterior. De los 25.320 millones de pesetas aplicados al ejercicio corriente no se ha dispuesto cantidad alguna, por lo que proceden los ajustes que se indican en el epígrafe 2.2.2.

2.1.2.- Presupuestos cerrados

Se ha iniciado la depuración de saldos de deudores presuntamente incobrables de ejercicios anteriores que se estiman en aproximadamente 14.000 millones de pesetas, anulándose en el ejercicio, por este motivo 486 millones de pesetas.

2.1.3.- Operaciones extrapresupuestarias

Diversas rúbricas de acreedores extrapresupuestarios, pendientes de aplicación definitiva, permanecen sin movimiento en el ejercicio, por lo que se hace precisa una depuración de dichos saldos.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

El art. 17 del Reglamento del Patrimonio de la Comunidad (Decreto 133/1988) dispone la elaboración de un Inventario General. No obstante, las diversas relaciones disponibles son incompletas y no figuran las valoraciones de los bienes.

- La contabilidad de los gastos plurianuales presenta entre otras las siguientes deficiencias, Compromisos en el cap. IV no permitidos por la Ley de Hacienda y la ausencia de la iniciación de la ejecución dentro del propio ejercicio.

- El aval concedido a la empresa SALCAI, S.A., por 217 millones de pesetas, no contaba con informes financieros favorables de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ni de la Intervención General.

2.2.2.- Cuentas de resultados

El déficit por operaciones no financieras del presupuesto corriente asciende a 20.895 millones de pesetas, al que hay que adicionar 1.036 millones de déficit por anulaciones y rectificaciones de ejercicios anteriores, hasta alcanzar un déficit total de 21.931 millones de pesetas.

El remanente de tesorería según datos contables asciende a 36.501 millones que deben minorarse en 33.038 según el detalle figurado a continuación, totalizando un remanente ajustado de 3.463 millones de pesetas.

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
1. Préstamo Banco Crédito Local reconocido en ejercicios anteriores y parcialmente dispuesto en 1990	(5.000)	3.750	(1.250)
2. Primer tramo de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones reconocido en ejercicios anteriores con exceso sobre el importe dispuesto	(27)	—	(27)
3. Préstamos del interior reconocidos en ejercicios anteriores, pendientes de disposición	(6.441)	—	(6.441)
4. Derechos reconocidos de préstamos no dispuestos	—	(25.320)	(25.320)
TOTAL	(11.468)	(21.570)	(33.038)

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

No han sido remitidos por la Audiencia de Cuentas al Tribunal, las Cuentas ni el informe de los distintos Organismos.

Los estados III-1.1 y III-1.2 que figuran en el volumen de Cuentas del Sector Publico Territorial reflejan, por ello, exclusivamente los créditos y previsiones iniciales.

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y ENTES PÚBLICOS

No ha sido recibido en este Tribunal el Informe de la Audiencia de Cuentas en relación con este subsector. No obstante, sí se han remitido las correspondientes cuentas, que han servido de fuente para la obtención de los anexos que se incluyen. De la información aportada se extraen las siguientes conclusiones:

- En "Promociones Exteriores de Canarias, S.A.", las amortizaciones de gastos de primer establecimiento y de ampliación de capital se consideran insuficientes. No se han provisionado las existencias de barcos adquiridos en 1988. Los criterios para el registro de las subvenciones presentan deficiencias, no aplicándose de manera uniforme. Por último, la Sociedad se halla incursa en el supuesto de disolución previsto en el art. 260 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, por insuficiencia del patrimonio respecto de la cifra del capital social.

- "Hoteles Escuela de Canarias, S.A." no cuenta con un inventario detallado y valorado de las inmovilizaciones materiales sujetas a reversión. Se observan deficiencias en la documentación soporte y registros contables de las ventas. Se hacen constar la existencia de posibles contingencias derivadas de un acta de inspección por 115 millones de pesetas y del incumplimiento por parte del arrendador de un contrato firmado durante el ejercicio.

- En la "Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO)", el informe elaborado por la Intervención General de la Comunidad pone de manifiesto la imposibilidad de verificar

las condiciones laborales y económicas en que se contrató al Director Técnico de la Sociedad al no existir contrato escrito ni recogerse las condiciones en Acta alguna del Consejo de Administración ni de la Junta General. Asimismo, se han detectado contingencias fiscales.

- En la sociedad "Viviendas Sociales de Canarias, S.A. (VISOCAN)" se han detectado incumplimientos del principio del devengo en la contabilización de las certificaciones de obra, así como diversas incertidumbres en relación con la ejecución de convenios firmados con la Comunidad Autónoma y con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

CANTABRIA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

Las cuentas de la Administración General y del Organismo autónomo "Escuela Regional de la Función Pública se han rendido a este Tribunal con un retraso de 25 días y 7 meses y medio, respectivamente; las cuentas relativas a las diferentes Empresas públicas, y restantes Entes públicos han sido rendidas con más de 7 meses de retraso sobre el plazo previsto en el art. 35 de la Ley de Funcionamiento de este Tribunal.

La cuenta de la Administración Regional no acompaña el estado correspondiente a la evolución y situación de los anticipos de Tesorería, que debe formar parte de la misma según el art. 87 de su Ley de Finanzas.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

No existe un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestaria al no aplicarse el Plan General de Contabilidad Pública.

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o sistemas de seguimiento y control susceptibles de valoración monetaria.

Los presupuestos liquidados presentan una previsión final inferior en 10.516 millones de pesetas a los créditos finales. Esta situación constituye una incongruencia desde el punto de vista contable.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

Existe una falta de cobertura en la financiación de las modificaciones de crédito de 7.845 millones de pesetas.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

- No se reconocen los intereses y amortizaciones de operaciones financieras de acuerdo con su vencimiento. Como consecuencia de ello las obligaciones de ejercicios anteriores y del presupuesto corriente se encuentran infravaloradas en 695 millones de pesetas y sobrevaloradas en 442 millones, respectivamente.

- Se produce una incorrecta contabilización de las operaciones de endeudamiento a corto plazo al haberse contabilizado, tanto su disposición como su amortización en el presupuesto corriente. Dichas operaciones, para financiar desfases de tesorería, deben reflejarse en operaciones extrapresupuestarias.

- No se reconocen los derechos por tributos cedidos en el momento de su liquidación, sino cuando se efectúa su recaudación. Ello supone una infravaloración de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores y en el presupuesto corriente de 345 y 148 millones de pesetas, respectivamente.

- La Comunidad recoge incorrectamente en sus presupuestos las transferencias a favor de las Corporaciones Locales correspondientes a la participación de estos entes en los ingresos del Estado, por un importe de 6.271 millones de pesetas.

- La contratación administrativa de los ejercicios 1989 a 1991 está siendo objeto de una fiscalización especial.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

Las existencias finales de acreedores y deudores de presupuestos cerrados incluyen partidas por 274 millones y 2.154 millones de pesetas, respectivamente, que se remontan al ejercicio 1985 y anteriores, por lo que deberían ser objeto de regularización.

2.1.4.- Operaciones extrapresupuestarias

Las cuentas de acreedores extrapresupuestarias mantienen en sus existencias finales, partidas por un total de 1.284 millones de pesetas, en concepto de ingresos pendientes de aplicación procedentes de ejercicios anteriores. Igualmente en deudores de carácter extrapresupuestario existen anotaciones en cuentas de anticipos por un total neto de 374 millones que afectan a los ejercicios 1983 a 1988. Ambas deben ser objeto de regularización.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

- En las existencias finales de la cuenta de tesorería no se incluyen salidas de efectivo de 728 millones de pesetas por el pago de la nómina de diciembre de 1990 y de los seguros sociales de noviembre 1990, por lo que figuran como diferencias de conciliación en el acta de arqueo.

Determinadas cuentas como las de pagos a justificar y restringidas de recaudación, con un saldo al cierre del ejercicio de 141 millones de pesetas, deben ser objeto de inclusión en la tesorería de la Comunidad.

- Del análisis del endeudamiento por plazo superior a un año que sirve de cobertura a los gastos de inversión, se deduce que el endeudamiento utilizable para 1991 asciende en principio a 2.721 millones de pesetas, dado que deben considerarse caducadas las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

La Comunidad no concreta la aplicación específica de las operaciones de endeudamiento a proyectos de inversión.

- El estado demostrativo de los gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros, previsto en el art. 87.4º de la Ley de Finanzas de la Comunidad, no recoge los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores. En consecuencia no se efectúa correctamente su contabilización independiente, conforme se dispone en el art. 36.3 de la citada Ley de Finanzas.

- No ha sido posible llegar a conocer el riesgo real existente al cierre del ejercicio por avales concedidos que importan 1.544 millones de pesetas.

Han resultado fallidos dos avales habiéndose satisfecho 53 millones de pesetas sobre un importe avalado por principal de 40 millones de pesetas.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

- El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps. 1 a 7), derivado de la liquidación presupuestaria determina un déficit de 16.441 millones de pesetas.

No obstante, dicho déficit debe disminuirse en 599 millones, según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicio anterior	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
Periodificación de gastos financieros según su vencimiento	(459)	453	(6)
Obligaciones no reconocidas	—	(9)	(9)
Tributos cedidos liquidados y pendientes de reconocer	345	148	493
Derechos reconocidos FCI sin documentación justificativa	—	(40)	(40)
Derechos del FEDER pendientes de reconocer	—	47	47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	(114)	599	485
OPERACIONES FINANCIERAS			
Amortización de obligaciones del Banco de Crédito Local, no reconocidas	(236)	(11)	(247)
Derechos reconocidos por préstamos del Banco de Crédito Local no dispuestos	—	(83)	(83)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	(236)	(94)	(330)
TOTAL	(350)	505	155

Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 15.842 millones de pesetas, inferior al previsto en sus presupuestos (25.982 millones de pesetas). Esta diferencia se debe a la falta de ejecución de las inversiones previstas.

- El remanente de tesorería al final del ejercicio, según las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 1.995 millones de pesetas. Dicho remanente debe aumentarse en 155 millones, según se indica en el cuadro anterior, presentando un saldo a 31 de diciembre de 1990 de 2.150 millones de pesetas.

3.- EMPRESAS PUBLICAS

CANTUR, S.A. ha presentado unas pérdidas en el ejercicio de 1.067 millones de pesetas lo que origina al cierre del ejercicio un déficit acumulado de 1.361 millones y un patrimonio neto de la Sociedad, inferior a la tercera parte del capital social desembolsado.

No consta el porcentaje de participación de SODERCAN en 27 empresas de las 28 que integran su inmovilizado financiero, por lo que no se puede deducir su carácter público y consiguiente rendición de cuentas a este Tribunal.

CASTILLA-LA MANCHA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha rindió la Cuenta General del ejercicio 1990, dentro del plazo legalmente establecido en el art. 136 del T.R.L.G.P.

En dicha Cuenta General no se incluye el estado de avales y las memorias del coste y rendimiento de los servicios públicos (arts. 132 y 134 del T.R.L.G.P.).

Las dos Empresas públicas han rendido sus cuentas fuera de plazo, con fecha 22 de abril de 1992, y sin incluir los programas de actuación, inversiones y financiación.

El Consejo Regional de la Juventud de Castilla-La Mancha ha presentado, a requerimiento de este Tribunal, una "Cuenta de liquidación del presupuesto y Memoria de actividades" del ejercicio 1990, que reviste las siguientes características: Ha sido presentada el 19 de mayo de 1993, con un retraso de más de dos años respecto al plazo señalado en la Ley de creación (Ley 2/1986 art. 10.2). La documentación remitida no está autorizada, ni consta aprobada por el órgano competente que, conforme al art. 6 de la citada Ley, es la Asamblea del mismo.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

No se ha implantado en el ejercicio 1990 un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestaria al no aplicarse el Plan General de Contabilidad Pública pese al avance que supone el nuevo sistema de información contable (SICAM).

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o sistemas de seguimiento y control susceptibles de valoración monetaria.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

La Comunidad no presenta un estado comprensivo de las modificaciones presupuestarias clasificadas por tipos modificativos, lo que dificulta la fiscalización de este Tribunal que ha de elaborar dicha información.

Existe una falta de cobertura en la financiación de las modificaciones de crédito de 3.042 millones de pesetas.

Los expedientes de modificación presupuestaria, concretamente los que afectan al cap. 1 de gastos, no incluyen en todos los casos el informe de la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad, que establece el art. 4.3 de la Ley 5/1989.

2.1.2.- Ejecución del Presupuesto

- Se mantiene el criterio seguido por la Comunidad, observado por este Tribunal en anteriores ejercicios, de recoger en sus Presupuestos el denominado "Fondo de Cooperación Municipal", cuyos recursos están constituidos por la participación de las Corporaciones Locales en los Ingresos del Estado.

- Los derechos reconocidos del ejercicio se encuentran infravalorados en 3.000 millones de pesetas como consecuencia de la disposición efectuada en el ejercicio de un préstamo del Banco de Crédito Local registrada en presupuestos cerrados.

- Sobre la contratación administrativa, se indica:

En 73 expedientes no consta el preceptivo informe de intervención crítica del gasto, de obligado cumplimiento a tenor de los arts. 5 y 24 de la L.C.E. y 84.e) y concordantes del R.G.C.

En 60 contratos adjudicados por concurso se ha invocado como causa para su utilización la prevista en el art. 35 de la L.C.E., referente a aquellas obras cuyos proyectos, aprobados por la Administración, fueren susceptibles de ser mejorados por otras soluciones técnicas a proponer por los licitadores. Por otra parte en ninguno de dichos procedimientos de adjudicación se ha acreditado la existencia de circunstancias concretas que, hubieran podido justificar la utilización del procedimiento de adjudicación por concurso.

No constan los informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas correspondientes a 6 contratos. Esta limitación adquiere especial relevancia, habida cuenta de que se adjudicaron al amparo de la causa del núm. 2 del art. 35 de la L.C.E., por tratarse de proyectos susceptibles de ser mejorados por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores, a fin de evaluar la naturaleza, características y consecuencias de las precitadas alternativas.

Se han producido retrasos, sin que se haya acreditado la concesión de las prórrogas necesarias o la declaración de suspensión de las respectivas obras ni señalado sus causas, en la ejecución de 29 contratos, y sin que, en sus respectivos expedientes conste la imposición a los contratistas de las penalidades por demora establecidas en los arts. 137 a 139 del R.G.C.

Resultan especialmente significativos los retrasos producidos en la ejecución de seis de ellos, ya que todos fueron adjudicados a empresas que propusieron reducción del plazo de ejecución inicialmente previsto.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

El saldo de acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados se halla sobrevalorado, al cierre del ejercicio, en 236 millones de pesetas, al recoger obligaciones por suscripción de acciones no desembolsadas.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

- Existen 176 cuentas bancarias restringidas de ingresos, con un saldo al cierre del ejercicio de 704 millones de pesetas, que corresponden a la recaudación de los últimos 6 días del año y que deberían haber sido incluidas en la cuenta de tesorería de la Comunidad.

- Del análisis del endeudamiento por plazo superior a un año que sirve de cobertura a los gastos de inversión, se deduce que el endeudamiento utilizable para 1991 asciende en principio a 16.500 millones de pesetas, dado que deben considerarse caducadas las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

- La Comunidad no ha formalizado ninguna concesión de aval desde 1988. No obstante, el control efectuado a través del seguimiento de los avales concedidos en anteriores ejercicios pone de manifiesto que se están asumiendo los riesgos por la Comunidad, sin que ésta se haya reintegrado del avalado en el presente ejercicio. El riesgo asumible por este ejercicio es de 118 millones de pesetas.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

- El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps. 1 a 7), derivado de la liquidación presupuestaria determina un superávit de 10.503 millones de pesetas.

No obstante, dicho superávit debe aumentarse en 640 millones, según el detalle siguiente:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
Incautación de fianza	—	27	27
Transferencias del Estado	—	613	613
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	—	640	640
OPERACIONES FINANCIERAS			
Incautación de fianza	—	(27)	(27)
Préstamos Banco de Crédito Local	(3.000)	3.000	—
Inversiones no desembolsadas	236	—	236
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	(2.764)	2.973	209
TOTAL	(2.764)	3.613	849

Resulta, por tanto, un superávit ajustado de 11.143 millones de pesetas.

- El remanente de tesorería al final del ejercicio, según las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 11.607 millones de pesetas. Dicho remanente debe aumentarse en 849 millones de pesetas, según se indica en el cuadro anterior, presentando un saldo positivo al 31 de diciembre de 1990 de 12.456 millones de pesetas.

3.- EMPRESAS PUBLICAS

La información financiera analizada pone de manifiesto que la actividad mercantil de la empresa "Gestur Guadalajara, S.A." ha sido nula durante 1990, y poco significativa en "Gestur Toledo, S.A.".

CASTILLA Y LEÓN

1.- OBSERVACIONES GENERALES

- La Cuenta General se ha rendido dentro del plazo legal establecido en el art. 35.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. No figuran en la cuenta de la Administración General la Memoria justificativa de los costes y de los rendimientos de los servicios públicos y la Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

- Las cuentas de las Empresas públicas se han presentado fuera del plazo establecido en el art. 35.5 de la Ley de Funcionamiento. Asimismo, no se han presentado los programas de actuación, inversión y financiación de las empresas Gesturcal, S.A. y Gestur Zamora, S.A., y son insuficientes los correspondientes a Gestur Palencia, S.A. y Gestur Segovia, S.A.

- No figuran unidas las cuentas de las Cortes de Castilla y León.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

- No se ha implantado el Plan General de Contabilidad Pública, por lo que la Comunidad carece de un sistema integrado de contabilidad presupuestaria y patrimonial, pese al avance que supone el nuevo sistema de información contable (SICCAL).

- El presupuesto de gastos por programas seguido por la Comunidad no se basa en objetivos e indicadores ni en sistemas de seguimiento lo suficientemente concretos y susceptibles de valoración, por lo que no resulta posible conocer y analizar objetivamente el coste y rendimiento de los servicios públicos.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

Del análisis de las modificaciones presupuestarias destaca lo siguiente:

- La Comunidad califica incorrectamente como incorporaciones de crédito la mayor parte de las modificaciones aprobadas, con excepción de las transferencias de crédito, minoraciones y modificaciones técnicas, detallando en liquidación sólo los importes de las modificaciones positivas y negativas. Estas circunstancias no afectan a la valoración cuantitativa del total de modificaciones, ni al contenido y tramitación de los distintos expedientes que se considera correcto en términos generales.

- Existe una falta de cobertura en la financiación de dichas modificaciones de 28.201 millones de pesetas, según se desprende del remanente de tesorería de 1989, ajustado por este Tribunal.

- Dentro de las incorporaciones de crédito se incluyen 101 millones de pesetas, que corresponden a anulaciones de acreedores por obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados, no autorizadas como supuesto en la normativa del ejercicio 1990.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

- La Comunidad registra en su estado de ingresos, derechos reconocidos y recaudados por importe de 51.395 millones de pesetas, correspondientes al remanente de Tesorería. Por su propia naturaleza este concepto no es un ingreso del ejercicio.

- Se han reconocido indebidamente derechos de endeudamiento sin disponer por 30.000 millones de pesetas. Asimismo se han dispuesto operaciones por 12.100 millones que se reconocieron en ejercicios anteriores. Por tanto, procede disminuir los derechos reconocidos en el ejercicio en la diferencia de dichos importes, 17.900 millones y los reconocidos en ejercicios anteriores en 12.100 millones.

- Con respecto a la contratación administra se indica:

Se han observado alteraciones irregulares de la ordenación cronológica reglamentaria de algunas actuaciones en los expedientes de contratación de obras públicas tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma, así como dilaciones excesivas respecto de expedientes cuya tramitación había sido declarada "de urgencia".

En este sentido, todos los expedientes de contratación de obras gestionadas por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento fueron tramitados por el procedimiento extraordinario de urgencia previsto y regulado en los arts. 25 y 26 de la L.C.E. y 86 y 90 de su Reglamento. La urgencia declarada no resultó congruente con la dilatada tramitación que se observa en 27 expedientes, en los cuales, desde el informe de supervisión del respectivo proyecto hasta la adjudicación del contrato, se dejó transcurrir un periodo de tiempo de 5 o más meses, periodo suficiente para haberse tramitado por el procedimiento ordinario.

En los procedimientos de adjudicación por contratación directa de 42 contratos, no se ha acreditado la realización de actuaciones para promover la concurrencia mínima de ofertas, de 3 o más empresas, preceptuada en los arts. 37 de la L.C.E. y 118 de su Reglamento.

Se han producido retrasos de más de 6 meses, sin que se haya acreditado la concesión de prórrogas o la declaración de suspensión de las respectivas obras ni señalado sus causas, en la ejecución de 21 contratos.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

- Dentro de los deudores y acreedores presupuestarios de ejercicios cerrados existen saldos que, por su antigüedad y escaso movimiento, pueden incurrir en prescripción.

- Asimismo, el estado de evolución de los deudores presupuestarios de ejercicios cerrados es insuficiente en su detalle y heterogéneo en su composición.

En los saldos deudores correspondientes a los ejercicios 1988 y 1989 se encuentran contabilizados 15.300 millones por operaciones de endeudamiento no dispuestas al cierre del ejercicio y que deben anularse disminuyendo el resultado de ejercicios anteriores.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

- La cuenta de tesorería presenta un saldo inferior al que se deriva de la ejecución de los presupuestos en 51.364 millones de pesetas. Dicho importe es debido, por una parte, al incorrecto registro como ingreso del remanente de tesorería de 51.395 millones y la diferencia a errores funcionales del sistema informático SICCAL afectando en parte negativamente al resultado del ejercicio (95 millones de pesetas).

Determinadas cuentas como las de pagos a justificar y restringidas de recaudación, con un saldo al cierre del ejercicio de 3.062 millones de pesetas, deben ser objeto de inclusión en la tesorería de la Comunidad.

Merece destacarse la gestión de los excedentes de tesorería que ha elevado sustancialmente los rendimientos financieros.

- Del análisis de endeudamiento por plazo superior a un año que sirve de cobertura a gastos de inversión se observa lo siguiente:

La cuenta de endeudamiento no incluye el endeudamiento asumido como consecuencia de traspasos de competencias, y se presenta más bien como memoria explicativa.

El endeudamiento por plazo superior a un año que sirve de cobertura a los gastos de inversión, utilizable para 1991, asciende a 32.168 millones de pesetas y no a la cifra pendiente de cobro por este concepto (45.300 millones), dado que deben considerarse caducadas las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

No se concreta la aplicación específica de las operaciones de endeudamiento a proyectos de inversión.

- La contabilización de los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros es más bien una mera agregación de los resúmenes heterogéneos aportados por cada Consejería que, entre otras deficiencias, no comprenden todos los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

- El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps. 1 a 7), derivado de la liquidación presupuestaria determina un déficit de 5.302 millones de pesetas.

No obstante, dicho déficit debe aumentarse en 95 millones, según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
Errores en acreedores extrapresupuestarios	—	(98)	(98)
Errores en deudores extrapresupuestarios	—	3	3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	—	(95)	(95)
OPERACIONES FINANCIERAS			
Derechos reconocidos del Rte. de Tesorería (cap.8)	—	(51.395)	(51.395)
Derechos reconocidos del endeudamiento (cap.9)	(12.100)	(17.900)	(30.000)
Deudores por derechos reconocidos de ejercicios cerrados - Endeudamiento (cap.9)	(15.300)	—	(15.300)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	(27.400)	(69.295)	(96.695)
TOTAL	(27.400)	(69.390)	(96.790)

Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 5.397 millones de pesetas, muy inferior al previsto en sus presupuestos (80.953 millones).

- El remanente de tesorería al final del ejercicio, que se deduce de las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 124.235 millones de pesetas. Dicho remanente debe disminuirse en 96.790 millones, según se indica en el cuadro anterior, presentando un saldo al 31 de diciembre de 1990 de 27.445 millones de pesetas.

CATALUÑA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

La Cuenta General ha sido rendida dentro del plazo legalmente establecido.

No ha sido presentada la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos programados, a que se refiere el art. 5.8 de la Ley de Finanzas Públicas.

No ha sido implantado un Plan General de Contabilidad Pública que permita el adecuado reflejo de la situación económico-financiera.

Solicitada la remisión de las cuentas del ejercicio a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, no han sido recibidas a la fecha de confección de este Informe Anual.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Presupuesto corriente

El presupuesto definitivo de gastos asciende a 1.120.978 millones de pesetas, siendo la estimación final de ingresos de 987.971 millones de pesetas. La diferencia entre los respectivos importes obedece a la ausencia de contabilización de las modificaciones del presupuesto de ingresos que deben financiar las correspondientes al presupuesto de gastos.

Modificaciones de crédito

Suponen un incremento neto del presupuesto de 133.007 millones de pesetas, del que 79.250 millones tienen su origen en ampliaciones de crédito para la amortización de préstamos a corto plazo, cuyas disposiciones se aplican, asimismo, al presupuesto de ingresos.

Se han contabilizado como "otras modificaciones" aumentos en créditos ampliables por importe de 7.938 millones de pesetas.

Ejecución del presupuesto de gastos

Se incluyen indebidamente en presupuestos los recursos transferidos por el Estado para el Instituto Catalán de la Salud, la participación de los entes locales en los Ingresos del Estado y la subvención nominativa a favor de "Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña". Estas operaciones pueden ser calificadas de "mera intermediación" por lo que no debieran reflejarse en el Presupuesto.

Han sido imputados con cargo a los créditos de este ejercicio, gastos generados en el ejercicio anterior por 3.410 millones de pesetas.

Se ha constatado cierto retraso en el reconocimiento de obligaciones del cap. 2.

No consta en el informe emitido por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña la existencia de irregularidades en materia de contratación administrativa.

Presupuesto de ingresos

Aún cuando durante el ejercicio 1990, siguiendo los criterios recomendados por la Sindicatura de Cuentas, se han reconocido con arreglo a su devengo los derechos correspondientes a determinadas transferencias, los servicios centrales siguen el criterio, en general, de reconocer los derechos al tiempo de su ingreso, lo que da lugar en ocasiones a una incorrecta imputación temporal, tal y como se recoge en los ajustes 2 a 8 del estado presentado en el apartado 2.2.

2.1.2.- Presupuestos cerrados

Las tesorerías territoriales no disponen de información acerca de la antigüedad de los saldos de derechos de ejercicios cerrados.

En el ejercicio 1990 no se contabilizan en deudores 2.055 millones de pesetas al darse provisionalmente de baja en 1988 de acuerdo con el Decreto 145/1987, y que se volverán a incluir en el ejercicio 1991.

En la agrupación de acreedores de ejercicios cerrados se han registrado anulaciones por importe de 1.596 millones de pesetas, siguiendo las recomendaciones hechas por la Sindicatura de Cuentas.

2.1.3.- Operaciones extrapresupuestarias

El saldo de deudores extrapresupuestarios, de 76 millones de pesetas, está constituido por anticipos renovables a justificar a los habilitados de diversos departamentos. Debieran figurar contabilizados también en esta agrupación los anticipos al personal.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

Debe acelerarse la confección del Inventario Integral de bienes y derechos de la Comunidad Autónoma.

El endeudamiento a medio y largo plazo alcanza en fin de ejercicio un importe global de 188.737 millones de pesetas, incluyendo 434 millones de diferencias de cambio negativas acumuladas, habiéndose registrado un incremento de 27.459 millones de pesetas, de los que 45 millones corresponden a las diferencias de cambio negativas producidas durante el ejercicio. El endeudamiento a corto plazo ha sufrido un incremento de 850 millones de pesetas sobre el existente en fin del ejercicio anterior.

Las cuentas de orden para control de recibos y valores no incluyen los documentos en poder de las Delegaciones Territoriales.

El importe pendiente de cobro por avales en poder del Servicio Jurídico de Recuperaciones asciende a 3.078 millones de pesetas.

El total de gastos comprometidos para ejercicios futuros asciende a 80.195 millones de pesetas.

2.2.- Resultados del ejercicio

El déficit resultante de las operaciones no financieras del presupuesto corriente es de 21.055 millones de pesetas. Las anulaciones registradas en ejercicios cerrados suponen un incremento del citado déficit en 115 millones, totalizando 21.170 millones de pesetas. No obstante, este importe registraría una disminución de 6.295 millones de pesetas si se hubieran considerado los ajustes que se presentan a continuación.

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
1. Obligaciones generadas en ejercicios anteriores imputadas a corriente	(3.410)	3.410	—
2. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales	637	(623)	14
3. Impuesto sobre actos jurídicos documentados	2.223	(113)	2.110
4. Ingresos provenientes del Ministerio de Educación y Ciencia	6.627	118	6.745
5. Pensiones asistenciales	104	958	1.062
6. Ingresos procedentes de E.A. de juegos y apuestas	610	632	1.242
7. Compensación transitoria	—	2.194	2.194
8. Intereses bancarios reconocidos en el ejercicio, correspondientes a ejercicios anteriores	281	(281)	—
9. Derechos incorrectamente anulados en 1988	2.055	—	2.055
TOTAL	9.127	6.295	15.422

El remanente de tesorería en fin de ejercicio, según se desprende de las cuentas rendidas, asciende a -136.897 millones de pesetas. Si se hubieran considerado los ajustes anteriormente expuestos, el remanente de tesorería totalizaría -121.475 millones de pesetas.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Conforme al art. 84.1 de la Ley de Finanzas Públicas, que recibió nueva redacción por la Disposición Adicional 21ª de la Ley 8/1986, de presupuestos para 1986, se integrará en la Cuenta General una "Cuenta de las entidades autónomas de carácter administrativo", mientras que las cuentas de las entidades autónomas de carácter comercial, industrial y financiero serían unidas a la Cuenta General por la propia Sindicatura de Cuentas. Asimismo se unen las de las distintas Empresas y Entes públicos.

La cuenta de las entidades administrativas es un estado agregado que contempla conjuntamente las operaciones de las 16 entidades que conforman el subsector, cada una de las cuales dispone, no obstante, de personalidad jurídica y patrimonio propios. De esta forma, no se justifica el distinto tratamiento que la Ley establece para las entidades administrativas, quedando la presentación de sus cuentas individuales excluida de la Cuenta General.

Los presupuestos iniciales agregados de los Organismos administrativos alcanzan un total de 48.789 millones de pesetas, de los cuales 21.681 millones de pesetas corresponden a la "Junta de Saneamiento" y 17.708 a la "Junta de Aguas de Cataluña". No facilitan estas entidades información acerca de la composición y situación de la totalidad del patrimonio. Se han generado durante el ejercicio remanentes de crédito por 10.724 millones de pesetas, fundamentalmente en operaciones de capital. El déficit no financiero asciende a 5.598 millones de pesetas, siendo el remanente de tesorería acumulado de 1.392 millones de pesetas, en fin de ejercicio.

El Neto Patrimonial, del conjunto de las nueve Entidades Autónomas de carácter comercial, industrial y financiero, a 31 de diciembre de 1990 es de 68.635 millones de pesetas, con un incremento sobre el ejercicio anterior de 6.818 millones de pesetas, originado por los resultados registrados y las subvenciones de capital recibidas. Los resultados agregados ascienden a 1.147 millones de pesetas, una vez consideradas las transferencias corrientes recibidas, por 4.014 millones de pesetas. Las transferencias de capital recibidas de la Generalidad ascienden a 9.040 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 82% respecto del ejercicio anterior.

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y ENTES PÚBLICOS

4.1.- CORPORACIÓN CATALANA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Las cuentas consolidadas del grupo (que incluye, además de la propia Corporación, a las sociedades "Televisión de Cataluña, S.A." y "Cataluña Radio, S.A.) presentan un activo total de 22.059 millones de pesetas, con unas pérdidas del ejercicio de 490 millones de pesetas, después de la aplicación de subvenciones de explotación por importe de 8.216 millones de pesetas. El patrimonio neto consolidado asciende a 14.247 millones de pesetas.

4.2.- RESTANTES ENTIDADES

Las catorce restantes entidades del subsector suponen un patrimonio neto agregado de 38.397 millones de pesetas. Las transferencias recibidas, corrientes y de capital, ascienden a 10.259 y 6.584 millones de pesetas, respectivamente. Los resultados agregados

arrojan unas pérdidas de 1.455 millones de pesetas, que ascenderían a 13.979 millones si se deducen los ingresos por subvenciones corrientes así como los imputados al ejercicio de subvenciones de capital.

4.3.- CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

El Centro de Información y Desarrollo Empresarial (CIDEM), entidad de derecho público creada por Ley 5/1985, ostenta participaciones en el capital de once sociedades, que se integran en su inmovilizado financiero, valoradas en cuentas en 1.640 millones de pesetas. La participación en la "Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña, S.A." (EPLICSA) es mayoritaria (99,98%). EPLICSA participa, a su vez, con un 76,1% en la empresa "Minas de Olot, S.A.", por lo que la participación indirecta del CIDEM en esta última empresa es, asimismo, mayoritaria.

El CIDEM valora su inmovilizado financiero según el coste de adquisición, sin registrar las pérdidas de valor derivadas de las disminuciones en el patrimonio neto de las distintas sociedades participadas, que, de haberse considerado, hubieran minorado el valor neto contable en fin de ejercicio en 124 millones de pesetas.

El Ente público incumple la obligación derivada del art. 32 de la Ley 4/1985, del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, de remitir al Consejo Ejecutivo un balance ajustado al Plan General de Contabilidad Pública. Ello obedece a que no aplica el citado plan sino el correspondiente a la empresa privada. Asimismo, incumple el art. 28 de la Ley 4/1985, no elaborando el preceptivo Programa de Actuación, de Inversiones y de Financiación.

Del total de los ingresos figurados en la cuenta de explotación (961 millones de pesetas), el 96% corresponde a subvenciones de explotación, otorgadas principalmente por la Generalitat.

EXTREMADURA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

- Las Cuentas Generales se han rendido a este Tribunal dentro del plazo legal establecido en el art. 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

- El Organismo autónomo de carácter administrativo "Instituto de Promoción del Corcho (IPROCOR), ha rendido sus cuentas a través de la Intervención General de la Junta, sin la correspondiente liquidación del presupuesto de ingresos.

- La sociedad "Artes Populares de Extremadura, S.A." no ha rendido cuentas.

El grupo SOFIEX ha rendido sus cuentas el 9 de septiembre de 1992, fuera del plazo previsto en el art. 35.2 de la Ley de Funcionamiento de este Tribunal, y sin incluir los presupuestos de explotación y capital, ni la ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación. Dichas cuentas se aprobaron el 20 de mayo de 1991.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

No se presenta una clasificación de los gastos públicos desarrollada por programas, careciendo además de una contabilidad analítica e indicadores que permitan conocer el coste de los servicios y el grado de cumplimiento de los objetivos programados.

La Junta no tiene totalmente implantado un Plan General de Contabilidad que posibilite conocer adecuadamente la situación económico-patrimonial de forma coherente y coordinada.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

Existe una falta de cobertura de los créditos incorporados de 16.860 millones de pesetas al ser el remanente real de tesorería al 31 de diciembre de 1989 negativo.

Se han detectado créditos generados sin haberse ingresado previamente los importes que le sirven de cobertura por 1.775 millones de pesetas.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto de gastos

- Los créditos iniciales autorizados superan en un 30% a los previstos en el anterior ejercicio y se incrementan a través de diversas modificaciones en un 35%. No obstante las obligaciones que se reconocen son inferiores en un 17% al crédito previsto inicialmente y en un 39% respecto a los créditos finales.

El grado de ejecución es del 61%, siendo las operaciones de capital las que lo muestran más bajo (50%), principalmente en razón a que el art. 61 "Proyectos de inversión nueva" en las aplicaciones relativas a construcción de viviendas, sobre unos créditos finales de 16.898 millones de pesetas, únicamente reconoce obligaciones por 4.159 millones (25%).

- Los gastos de personal no son fiscalizados, dado que no se ha dispuesto de los documentos necesarios que deben enlazar la nómina mensual con su contabilización. Por otra parte, no se han efectuado pagos a MUNPAL y MUFACE por las retenciones practicadas a los funcionarios y quedan pendientes de aplicación a presupuesto 509 millones, abonados a la Seguridad Social.

- De la contratación administrativa se destaca:

El 85% del importe global de los contratos de obras fiscalizados se ha adjudicado mediante concurso, en los que las bajas son inferiores a las obtenidas en el sistema de subasta, sin que por otra parte se haya acreditado la existencia de circunstancias concretas que, pudieran justificar la utilización del procedimiento de concurso, otorgándose a los órganos de contratación amplios márgenes de discrecionalidad al no constar en los Pliegos de Cláusulas Administrativas fiscalizados criterios ordenados para la selección del contratista.

En la mayoría de los expedientes de contratos adjudicados por contratación directa examinados no se especifican ni justifican las causas por las que se utilizó este procedimiento excepcional, con infracción de la normativa vigente que sólo admite dicho procedimiento en los supuestos taxativamente enumerados en la L.C.E. y su Reglamento.

Se han producido retrasos, sin que se haya acreditado la concesión de prórrogas o la declaración de suspensión de las respectivas obras, o señalado sus causas, en la ejecución de 9 contratos, destacándose especialmente 7 de ellos, cuya ejecución ha experimentado retrasos de más de 6 meses.

En las obras adicionales aprobadas durante la ejecución del contrato sobre "Instalaciones para hotel de dos estrellas en Orellana (Badajoz)", adjudicado el 12 de septiembre de 1990, una vez iniciada la ejecución de sus correspondientes obras el 20 de octubre de 1990, se autorizó un proyecto modificado el 2 de noviembre de dicho año, cuyo importe representó el 19,99% del primitivo, adjudicándose a la misma empresa el 27 de noviembre; en esa misma fecha se le adjudicó también un contrato de obras complementarias representativo del 19,93% del primitivo.

2.1.3.- Ejecución del presupuesto de ingresos

La previsión inicial supera en 20 millones de pesetas al crédito inicial autorizado, debido a que se registra de manera improcedente en el cap. 4 "Transferencias corrientes", las aportaciones previstas de las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres con destino final al Organismo autónomo IPROCOR.

El presupuesto ejecutado es inferior en 2.531 millones de pesetas al previsto inicialmente. No obstante las modificaciones efectuadas lo incrementan en 29.977 millones.

2.1.4.- Presupuestos cerrados y operaciones extrapresupuestarias.

Los saldos de deudores y acreedores, tanto por presupuestos cerrados como por operaciones extrapresupuestarias carecen del detalle individualizado y de la documentación correspondiente que permita determinar la realidad de esos importes.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

- No se ha obtenido información fiable sobre las inversiones financieras efectuadas en ejercicios anteriores y su situación actual.

- No se incluyen en la cuenta de tesorería los movimientos y saldos de las cuentas bancarias abiertas a nombre de las distintas Consejerías, que en su mayoría responden al concepto de anticipo, y que ascienden según declaración de las mismas a 71 cuentas, con un saldo al cierre del ejercicio de 1.053 millones de pesetas. Además no están incluidas las 5 cuentas de la Asamblea con un saldo de 112 millones de pesetas, las 6 de la Caja Postal por tasas recaudadas por 117 millones de pesetas ni las de la Consejería de Sanidad y Consumo.

- No ha sido posible comprobar que el endeudamiento a largo plazo dispuesto ha financiado las inversiones efectuadas al no constar en los proyectos sus fuentes de financiación.

- El estado demostrativo de los gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros, previsto en el art. 105 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad no recoge los compromisos aprobados en ejercicios anteriores, y al menos dos de los aprobados en 1990 por un total de 41 millones no se encuentran entre los supuestos contemplados en el art. 46 de la Ley de Hacienda de la Comunidad y art. 61.2 de la Ley General Presupuestaria.

- La relación de avales presentada continúa en periodo de depuración y seguimiento por los concedidos en ejercicios anteriores.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps. 1 al 7) derivado de la liquidación presupuestaria, determina un superávit de 11.528 millones de pesetas. No obstante, dicho superávit debe disminuirse en 11.789 millones según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
Gastos de Seguridad Social no contabilizado	—	(509)	(509)
Exceso de gastos financieros reconocidos	—	1	1
Exceso de obligaciones reconocidas	—	58	58
Obligación incorrecta al cap. 8 del aval de Carjerez	—	(13)	(13)
Imputación errónea de los derechos por Participación en Ingresos del Estado	(809)	(2.051)	(2.860)
Transferencias de las Diputaciones Provinciales al IPROCOR	—	(9)	(9)
Reconocimiento incorrecto de derechos del FCI en 1990	—	(6.485)	(6.485)
Exceso de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores	217	—	217
Reconocimiento incorrecto de derechos del FCI en ejercicios anteriores	(2.566)	—	(2.566)
Gastos de Seguridad Social contabilizados en operaciones extrapresupuestarias	(570)	—	(570)
Modificación saldos extrapresupuestarios	—	(2.781)	(2.781)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	(3.728)	(11.789)	(15.517)
OPERACIONES FINANCIERAS			
Aplicación incorrecta al cap. 8 del aval de Carjerez	—	13	13
TOTAL	(3.728)	(11.776)	(15.504)

En definitiva, el resultado por operaciones no financieras del ejercicio 1990 ajustado presenta un déficit de 261 millones de pesetas.

- El remanente de tesorería al final del ejercicio, según las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 15.495 millones de pesetas.

Dicho remanente debe disminuirse en 15.504 millones de pesetas según el detalle que se muestra en el cuadro anterior, lo que determina un saldo negativo al 31 de diciembre de 1990 de 9 millones de pesetas.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El "Instituto de Promoción del Corcho", no presenta en su actividad aquellas notas esenciales que le deben caracterizar como Organismo autónomo, así el estado de gastos liquidado no consigna el producido en el cap. 1 "Gastos de personal", que se liquida directamente en la cuenta de Administración de la Junta y que asciende a 56 millones de pesetas, por lo que se incumple el art. 13 de la Ley 3/1985 de la Hacienda Pública. Además, se contabilizan en la liquidación del presupuesto de gastos 26 millones de pesetas menos que los legalmente autorizados.

4.- EMPRESAS PUBLICAS

- No se tiene certeza de haber recibido la información económica correspondiente a la totalidad de las Empresas públicas existentes.

- SOFIEX, S.A. ha presentado unas pérdidas de 461 millones de pesetas.

- "Urbanizaciones y Viviendas de Extremadura, S.A." (URVIEXSA), sociedad en la que participa SOFIEX con un 50%, presenta al cierre del ejercicio pérdidas acumuladas que equivalen al capital suscrito, lo que ha hecho necesaria una ampliación de capital de 60 millones de pesetas, aprobada por la Junta General el 21-1-90.

- "Iniciativas Agrícolas Extremeñas, S.A.", sociedad en la que participa SOFIEX con un 73%, ha regularizado pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, que importan 181 millones de pesetas, junto a otras generadas en el propio ejercicio por un valor de 59 millones, mediante reducción de su capital social en 240 millones de pesetas, con una simultánea ampliación de 230 millones.

FORAL DE NAVARRA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

El sistema contable está basado en el Plan General de Contabilidad Pública, implantado desde 1986.

La Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero, que aprueba los presupuestos para 1990, autoriza los créditos de forma consolidada para la Administración General e Institucional. Los estados financieros y anexos presentados en el informe emitido por la Cámara de Comptos de Navarra son, asimismo, consolidados, sin que, en el texto del informe se aprecie un tratamiento separado de cada entidad.

Debe considerarse que la existencia de entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios debe ir unida a la configuración de instrumentos presupuestarios y contables conformes con su autonomía.

Solicitada la remisión de las cuentas del ejercicio a la citada Cámara, no han sido recibidas a la fecha de confección de este Informe Anual.

Los anexos y estados incluidos en este informe, que toman como fuente los remitidos por la Cámara, contemplan conjuntamente tanto la Administración General como la Institucional, siendo, por ello, no homogéneos con el resto del sector.

No constan en el informe elaborado por la Cámara de Comptos expresas menciones acerca de la rendición contable, en cuanto a plazo, forma y contenido. No se incluye estado demostrativo de la situación y evolución de los derechos a cobrar de ejercicios anteriores, ni la cuenta general de tesorería, ni la de compromisos de gasto de ejercicios futuros. Asimismo, tampoco se proporcionan los balances y cuentas de resultados de las Empresas Públicas.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Presupuesto corriente

Modificaciones de crédito

El presupuesto inicial consolidado alcanza 124.476 millones de pesetas, suponiendo las modificaciones un incremento neto de 37.856 millones, hasta totalizar 162.332 millones de pesetas de créditos finales; destacando el importe de las ampliaciones de crédito por 32.091 millones de pesetas, fundamentalmente originadas en la partida "Aportación al Estado", por 26.061 millones de pesetas, en ejecución del Convenio Económico de 31 de julio de 1990.

Ejecución del presupuesto de gastos

Las obligaciones reconocidas se han incrementado en un 54% respecto del ejercicio anterior, debido básicamente a la firma del Convenio Económico con el Estado y a la asunción de las transferencias en materia de educación a partir del 1 de septiembre, que da lugar al abono de las subvenciones previstas en la LOGSE.

En lo que se refiere a la gestión de las nóminas se ha detectado la inexistencia de un Registro General de Personal, así como la sistemática imputación al ejercicio siguiente de la cuota patronal de la Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre, que en el ejercicio asciende a 257 millones, habiéndose imputado la del ejercicio anterior por 140 millones de pesetas.

En gastos del cap. 2, se observa la utilización generalizada del sistema de adjudicación directa en todos los contratos examinados y la inexistencia de expediente administrativo en contratos de importe inferior a 350.000 Ptas., entre otras anomalías.

En materia de subvenciones se detecta la no exigencia en las distintas convocatorias de que el beneficiario acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales, así como deficiente publicidad y promoción de la concurrencia en las destinadas a fomentar la formación de capital humano.

Se ha incumplido el art. 133 de la Ley Foral 13/1986 de contratación, que prescribe la remisión a la Cámara de los contratos de importe superior a 25 millones de pesetas. Entre los defectos observados se citan: ausencia del acta de comprobación del replanteo, del propio contrato, del acta de recepción provisional y de la publicación en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.

Ejecución del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos experimentan un incremento del 85% con respecto al ejercicio anterior, básicamente motivado por los 42.895 millones en concepto de compensación de impuestos indirectos de los ejercicios 1986, 1987 y 1988, de acuerdo con lo establecido en la Ley 18/1986, de 5 de mayo, de adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la imposición indirecta, disposición derogada con la entrada en vigor del nuevo Convenio Económico con el Estado, percibidos en el ejercicio siguiente.

Se observan diversas anomalías en la contabilización de los ingresos tributarios, no existiendo una adecuada coordinación entre los servicios de gestión y los de contabilidad, que produce la consiguiente incertidumbre acerca de la razonabilidad de los contraídos y de sus efectos sobre los resultados que se extiende al adecuado conocimiento de la recaudación obtenida y de los derechos pendientes de cobro.

El censo de Sociedades precisa ser depurado, observándose diferencias significativas con las declaraciones presentadas.

Derechos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio, por importe de 600 millones de pesetas, se han imputado indebidamente al ejercicio, correspondiendo al anterior.

2.1.2.- Presupuestos cerrados

La ausencia de uniformidad en los criterios aplicados a la contabilización de los tributos, junto con la existencia de deudores en ficheros auxiliares, no contabilizados, condiciona la representatividad de las cifras contables correspondientes. Debe proseguir la depuración de los saldos provenientes de ejercicios anteriores.

En lo que se refiere a los acreedores presupuestarios de ejercicios anteriores, se detectan anomalías que impiden el exacto conocimiento de su saldo al cierre del ejercicio.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

La no revisión y depuración de los saldos del inmovilizado material, traspasados de la contabilidad presupuestaria, junto con la carencia de un inventario actualizado de bienes, no permite asegurar la razonabilidad de los importes registrados.

En relación con el inmovilizado financiero, se detectan deficiencias derivadas de la ausencia de remisión de la información sobre préstamos al Departamento de Contabilidad.

Análoga situación se observa en relación con los inventarios físicos de existencias de los distintos Hospitales.

Los defectos observados en informes anteriores en relación con el control de los valores recibidos en concepto de fianzas se han visto subsanados en el presente ejercicio.

2.2.2.- Cuentas de resultados

Los resultados por operaciones no financieras derivados de la contabilidad presupuestaria presentan un superávit de 40.616 millones de pesetas, que disminuido por el déficit de 6.656 millones derivado de modificaciones de ejercicios anteriores, supone un superávit consolidado de 33.960 millones, que debe disminuirse en 717 millones a consecuencia de los ajustes que se presentan a continuación:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
1. Cargas sociales del mes de diciembre de 1989	(140)	140	—
2. Cargas sociales del mes de diciembre de 1990	—	(257)	(257)
3. Ingresos del ejercicio anterior imputados al corriente	600	(600)	—
TOTAL	460	(717)	(257)

El remanente de tesorería resultante de los datos contables alcanza un valor positivo de 66.833 millones que debe, asimismo disminuirse en 257 millones, como consecuencia de los ajustes anteriores.

El resultado derivado de las operaciones contabilizadas, según los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública, implantado por la Comunidad presenta el siguiente desarrollo:

	Beneficio/(Pérdida)
Resultados corrientes	73.789
Resultados extraordinarios	(23.028)
Modificaciones derechos y obligaciones de ejercicios anteriores . . .	(4.082)
Resultado del ejercicio	**46.679**

3.- EMPRESAS PUBLICAS

El subsector está constituido por 22 empresas, 16 se dedican a la gestión de servicios públicos, de las cuales 2 no son operativas y 6 son sociedades financieras patrimoniales de las que una está en fase de liquidación y otra ha sido adquirida en el ejercicio para su disolución y liquidación.

No se han revisado por la Cámara de Comptos las cuentas anuales de las empresas. No obstante, de los informes de auditoría privada la citada Cámara deduce entre otras las siguientes salvedades:

En CETENASA existe una contingencia no evaluable por avales.

En ITG del Cereal, S.A., no se han aplicado los principios de contabilidad en la valoración de los cultivos en curso.

En SODENA no se ha dispuesto de suficientes elementos de juicio para evaluar la razonabilidad de las provisiones por depreciación del inmovilizado financiero. Asimismo se pone de manifiesto la incertidumbre no cuantificada por posible minusvalía patrimonial de la participación en "Meler Aplicadores de HOT-HELT, S.A.".

GALICIA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

Conforme a lo dispuesto en el art. 53.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril), por Ley 6/1985, de 24 de junio, se regula el Consejo de Cuentas de Galicia, que ha iniciado su actividad con la emisión del Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma Gallega de 1990.

Las cuentas fueron rendidas el 15 de enero de 1992, con un retraso superior a dos meses.

La inexistencia de un sistema de contabilidad analítica, así como de indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, impiden la adecuada fiscalización de la racionalidad en la ejecución del gasto público basada en criterios de eficacia y economía.

El 1 de julio, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley 2/1990 de Presupuestos Generales para 1990, entró en funcionamiento el sistema contable XUMCO (Xunta, Mecanización Contable), implantado por Orden de 1 de diciembre de 1989 de la Consejería de Economía y Hacienda, que, entre otras innovaciones, "implanta el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad en coordinación con el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración del Estado" (preámbulo de Orden de 1 de diciembre de 1989). No obstante la implantación se ha realizado de forma parcial, no obteniéndose el balance de situación ni la cuenta de pérdidas y ganancias.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

Los presupuestos para 1989 fueron automáticamente prorrogados a 1 de enero de 1990, conforme a lo previsto en la citada Ley 3/1984, de Gestión Económica y Financiera pública, hasta el 30 de junio de 1990.

El importe inicial de las previsiones de ingresos y gastos asciende a 349.874 millones de pesetas, con un incremento del 24% sobre el ejercicio precedente.

2.1.1.- Presupuesto corriente

Modificaciones de crédito

El incremento neto de los créditos presupuestarios ha ascendido a 55.549 millones de pesetas, destacando las incorporaciones de crédito (43.371 millones) y las ampliaciones (7.453 millones).

Entre las anomalías detectadas deben citarse la falta de alguno de los requisitos establecidos en la Orden de 3 de enero de 1989 de la Consejería de Economía, sobre documentación y tramitación de expedientes de modificación (83 expedientes), incorporaciones de ejercicios anteriores a 1990 en las que no consta justificación (13 expedientes) e incorrecta calificación de los diferentes tipos de modificación (22 expedientes).

Puede señalarse en particular la inadecuada calificación de ampliaciones de créditos en vez de generaciones de créditos por ingresos, entre los que destaca uno de 4.412 millones de pesetas correspondiente a la Consejería de Economía.

Ejecución presupuesto de gastos

Los créditos finales ascienden a 405.423 millones de pesetas, registrándose un grado de ejecución del 84%. No obstante, los capítulos 6 y 7 presentan un grado de ejecución inferior a la media (75% y 57% respectivamente). El grado de cumplimiento alcanza el 90%.

Las obligaciones reconocidas, que ascienden a 340.682 millones de pesetas, suponen un incremento del 19% sobre el ejercicio 1989, siendo destacable la variación relativa registrada en los capítulos 3 y 9, en que superan el triple del importe reconocido en el ejercicio precedente.

En la ejecución del cap. 1-Gastos de personal, se han observado diversas irregularidades, tales como la inexistencia de relaciones pormenorizadas mensuales del personal al servicio de las distintas Consejerías y sus variaciones, así como la deficiente centralización de todo el personal en el Registro correspondiente. Por otra parte, se han detectado irregularidades en la determinación del porcentaje de retención impositiva y en el cuadre mensual de la nómina.

Los gastos a justificar por dietas y locomoción presentan diversas anomalías entre las que destacan la insuficiente justificación de los gastos de viaje y el incumplimiento de los plazos para efectuarla.

Las deficiencias constatadas en contratos de obras hacen referencia fundamentalmente a actas de comprobación del replanteo realizadas con anterioridad a la celebración de los contratos, inexistentes o fuera de plazo, incumplimiento de plazo en la constitución de la fianza definitiva, así como diversas omisiones en la remisión de documentación.

Ejecución del presupuesto de ingresos

Se incluyen indebidamente en los presupuestos de la Administración General los ingresos y gastos por las transferencias del Estado destinadas a las Corporaciones Locales procedentes del Fondo Nacional de Cooperación Municipal. Aquéllos ascienden a 57.762 millones de pesetas.

Se mantiene el criterio erróneo de no contabilizar las modificaciones pertinentes del presupuesto de ingresos a que dan lugar las modificaciones del presupuesto de gastos. De esta forma, las previsiones finales son iguales a las iniciales, ascendiendo

a 349.874 millones de pesetas y siendo el grado de ejecución del 86%.

La recaudación líquida, 315.074 millones de pesetas, ha registrado un incremento del 26% sobre la obtenida en el ejercicio anterior, presentándose la variación más significativa en el cap. 9-Pasivos financieros, que ha pasado de 7.000 millones a 36.996 millones de pesetas en 1990.

De las anomalías detectadas cabe destacar la aplicación al ejercicio corriente de partidas que debieron reconocerse en el ejercicio anterior, por importe de 246 millones de pesetas, así como diversas carencias del sistema de contraído previo.

2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

El inventario de bienes de la Comunidad se encuentra pendiente de finalización.

Las anomalías detectadas en las relaciones pendientes de cobro aconsejan una depuración de sus saldos.

Se ha constatado un elevado número de cuentas bancarias no autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, así como de cuentas abiertas, sin movimiento y con saldo cero.

Las cuentas extrapresupuestarias representativas de saldos de IVA repercutido y de Hacienda pública acreedora por IVA deberían ser objeto de depuración.

La deuda viva por operaciones de crédito ascendía en fin de ejercicio a 48.570 millones de pesetas, tras la realización de dos créditos sindicados por importe total de 37.000 millones de pesetas. No obstante, la cuenta de liquidación recoge una recaudación líquida inferior en 4 millones de pesetas, no aclarada.

No consta justificación documental de los gastos de emisión y cancelación de Deuda Pública, por importe de 47 millones de pesetas.

El riesgo por los avales concedidos se eleva a 37 millones de pesetas, correspondientes a un aval fallido en el ejercicio 1987.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El déficit no financiero del presupuesto corriente asciende a 39.965 millones de pesetas y a 491 el derivado de las modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores. Con los ajustes que se detallan a continuación se obtiene un déficit no financiero de 40.779 millones.

El remanente de tesorería en fin de ejercicio presenta un saldo negativo de 20.968 millones, que con los ajustes que se detallan, el déficit sería de 20.725 millones.

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
1.- Intereses demora aval vencido	(7)	(4)	(11)
2.- Transferencias corrientes imputadas al ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores.	246	(246)	—
3.- Derechos FEDER imputados al ejercicio corriente y correspondientes al ejercicio anterior.	327	(327)	—
4.- Obligaciones indebidamente reconocidas FCI	—	254	254
TOTAL	566	(323)	243

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

La Administración Institucional está integrada por tres Organismos autónomos:

- Escuela Gallega de Administración Pública, de carácter administrativo.
- Instituto Gallego de Estadística, asimismo administrativo.
- Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo, de carácter comercial, industrial y financiero.

Hasta diciembre de 1991 no se aprueban los planes de cuentas correspondientes, por lo que su contabilidad durante el periodo considerado sigue el modelo tradicional por partida simple.

Se exponen a continuación los resultados de la fiscalización efectuada en el más relevante de los tres desde un punto de vista cuantitativo.

3.1.- INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO

Se han observado, entre otras, las siguientes irregularidades y deficiencias:

- El presupuesto presenta la estructura propia de los Organismos de carácter administrativo, lo que no es conforme a su naturaleza.
- La financiación prevista en el presupuesto por recurso al remanente de tesorería acumulado en ejercicios anteriores es superior en 2.031 millones de pesetas al remanente que efectivamente existía en fin del ejercicio anterior, según se deduce de las cuentas rendidas. Las incorporaciones de crédito aprobadas superan en 492 millones de pesetas el importe efectivo del remanente.
- No dispone de un sistema de control del patrimonio inmobiliario acorde con el elevado volumen de expedientes gestionados.
- La contabilización de las ayudas que la Administración General concede a los adquirentes de viviendas de protección oficial es inadecuada, figurando en el presupuesto tanto los pagos como los ingresos.
- La partida extrapresupuestaria representativa del IVA repercutido no registra la totalidad de los importes devengados. No se contempla la partida de IVA soportado, que se aplica incorrectamente al presupuesto de gastos. Las liquidaciones presentadas ante la Hacienda Pública contienen desfases temporales respecto al momento del devengo de las distintas operaciones.
- En el ejercicio se devengaron partidas acreedoras por importe de 663 millones de pesetas que fueron contabilizadas en el siguiente. Adicionalmente, se contabilizaron partidas por importe de 494 millones, cuyo devengo se había producido en el ejercicio anterior.
- Se han reconocido derechos por importe de 2.988 millones de pesetas que debieran haberse contabilizado en ejercicios anteriores, como consecuencia de la aplicación del erróneo criterio, modificado en el ejercicio, de reconocer exclusivamente los importes cobrados.

4.- EMPRESAS PUBLICAS

La Compañía de Radio Televisión de Galicia no dispone de un inventario físico detallado de los bienes del inmovilizado material que le han sido adscritos por la Administración General de la Comunidad.

Las sociedades "Televisión de Galicia, S.A." y "Radiotelevisión Galicia, S.A.", muestran patrimonio neto negativo, hallándose incursas en el supuesto previsto en el art. 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

ISLAS BALEARES

1.- OBSERVACIONES GENERALES

La CAIB ha rendido al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del ejercicio 1990 dentro del plazo previsto en el art. 96.3 de su Ley de Finanzas. Dicha Cuenta General presenta la estructura y contenido previstas en los arts. 96 y 97 de la citada Ley.

Todas las Empresas públicas de la Comunidad han rendido sus cuentas en plazo y formando parte de la Cuenta General. De los programas de actuaciones, inversión y financiación no constan datos sobre su ejecución.

El contenido y forma de presentación de las mismas es bastante heterogéneo, no adaptándose a los modelos establecidos con carácter general en el Plan General de Contabilidad.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Al no aplicarse el Plan General de Contabilidad Pública, no existe un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestaria

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o sistemas de seguimiento y control susceptibles de valoración monetaria.

No se ha obtenido relación de acreedores a fin de ejercicio, por las obligaciones reconocidas pendientes de pago.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

Las modificaciones realizadas sobre los créditos para inundaciones y lluvias catastróficas (9.895 millones de pesetas) y los remanentes de crédito que por este concepto existen a final del ejercicio (7.119 millones de pesetas) evidencian el exceso de estos créditos adicionales autorizados.

Se incluye irregularmente en la liquidación del ejercicio un suplemento de crédito, para reparación de daños causados por lluvias torrenciales, de 2.000 millones de pesetas, aprobado en el ejercicio siguiente por Ley 3/1991, de 13 de febrero.

Dentro de las incorporaciones de crédito se incluyen 86 millones de pesetas correspondientes al superávit de la liquidación del ejercicio 1989, lo que no se ajusta a la normativa aplicable en 1990 (art. 46.2 de la Ley de Finanzas de la Comunidad), además de no ser financieramente posible con datos ajustados de aquel ejercicio.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

- Los derechos reconocidos en el Cap. 9-"Variación de pasivos financieros" del presupuesto de ingresos, reflejan las autorizaciones para la contratación de crédito realizadas al amparo de la Ley de Presupuestos del ejercicio, así como leyes de créditos extraordinarios y de suplemento independientemente de su efectiva formalización y disposición; por lo que dicho capítulo recoge 4.695 millones de pesetas que no representan auténticos pasivos financieros del ejercicio.

- Del análisis del endeudamiento por plazo superior a un año, que sirve de cobertura a gastos de inversión, se deduce que el utilizable para 1991 asciende a 6.695 millones de pesetas, y no a la cifra de derechos reconocidos pendientes de cobro por este concepto (14.698 millones de pesetas), dado que deben considerarse caducadas a dicha fecha las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

- En la contratación administrativa se destaca:

Se ha producido retraso de más de 6 meses, sin que se haya acreditado la concesión de prórrogas, en la ejecución del contrato "Proyecto de obras complementarias (Refugio de estructura) Hospital de las Enfermedades del Tórax J. March".

En el "Modificado núm. 1 del proyecto de ensanche y mejora de firme de la carretera C-710, de Pollensa a Andraitx, tramo Esporles-Banayalbufar", no se ha acreditado la existencia de necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto principal, que hubieran podido justificar la modificación posterior del mismo, respecto de una parte de las obras comprendidas en dicha modificación, concretamente las destinadas a la reducción del impacto ambiental, tales como la formación de muros rústicos de mampostería en seco similares a los que ya existían, repoblaciones, etc., ya que dichas medidas pudieron haberse previsto en la elaboración del proyecto principal, habiéndose infringido, en consecuencia, el art. 149 del RGC.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

En operaciones de endeudamiento se da la misma irregularidad ya citada, siendo por tanto, ficticios los deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados, por importe de 10.003 millones de pesetas.

Durante 1990 se ha continuado la depuración de los deudores por derechos reconocidos de ejercicios anteriores, por préstamos concedidos a los Ayuntamientos de la Comunidad.

2.1.4.- Operaciones extrapresupuestarias

No se han registrado en contabilidad las operaciones de endeudamiento a corto plazo, concertadas por la Comunidad para atender desfases transitorios de Tesorería, y que al cierre del ejercicio estaban pendientes de reembolso por valor de 2.425 millones de pesetas.

2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA

No se incluyen en la cuenta de Tesorería los movimientos y saldos de las cuentas bancarias de gestión (pagos e ingresos a justificar) que ascienden a un total de 38 millones de pesetas al cierre del ejercicio.

La Comunidad no concreta la aplicación específica de las operaciones de endeudamiento a proyectos de inversión.

La presentación realizada por la Comunidad en relación a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, no comprende los adquiridos en ejercicios anteriores.

No existe un procedimiento reglamentario para el adecuado registro y seguimiento de los avales concedidos.

El resultado de la liquidación del ejercicio, capítulos 1 a 7 de la clasificación económica, presenta un déficit total de 4.208 millones de pesetas. Asimismo, el remanente de Tesorería a fin de ejercicio se eleva a 12.380 millones de pesetas.

El remanente de tesorería debe ajustarse en 14.698 millones de pesetas, con el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS	—	—	—
OPERACIONES FINANCIERAS			
- Derechos reconocidos Cap. 9	—	(4.695)	(4.695)
- Deudores por derechos reconocidos de ejercicios anteriores Cap. 9	(10.003)	—	(10.003)
TOTAL	(10.003)	(4.695)	(14.698)

En consecuencia el remanente de tesorería real presenta un saldo negativo de 2.318 millones de pesetas.

3.- EMPRESAS PUBLICAS

Las sociedades mercantiles examinadas (SEFOBASA, IBABSA, SEAMASA) obtienen, con carácter general, beneficios en el ejercicio, si bien ello es consecuencia de las subvenciones recibidas de la Comunidad Autónoma aplicadas a la explotación.

Las 5 entidades de derecho público, pese a la importancia de las subvenciones recibidas, obtienen pérdidas en el ejercicio.

Las entidades de derecho público "Instituto Balear de Saneamiento" e "Instituto Balear de Promoción del Turismo", al carecer de patrimonio fundacional, su financiación procede de las subvenciones de capital y del endeudamiento, por lo que sus recursos propios presentan valores negativos.

El significativo volumen de endeudamiento que presenta el enta de derecho público "Instituto Balear de Saneamiento", hace albergar dudas razonables sobre su devolución y pago de intereses, mediante los ingresos ordinarios de la entidad. Teniendo en cuenta que dicho endeudamiento se ha avalado por la Administración General, podría plantearse que el mismo puede constituir un mayor pasivo financiero de ella.

Del "Instituto Balear de Promoción del Turismo" se indica:

En 1990 se ha cambiado el criterio de registro contable de las subvenciones recibidas, que se consideran de capital o explotación según el destino que se les dé.

No se han registrado 182 millones de pesetas de subvenciones del ejercicio hasta su cobro en 1991, aplicando el criterio de caja y no el devengo, que es el indicado en el PGC.

La coincidencia de funciones y vinculación de esta Entidad con la Dirección General de Promoción de Turismo, crea incertidumbre sobre el ámbito de los gastos asumibles por cada una de ellas.

LA RIOJA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

La Cuenta General se rindió dentro del plazo establecido en los artículos 136 de la TRLGP y 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La Cuenta General se ha rendido sin incluir la siguiente documentación:

1. Estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de Tesorería.

2. Estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros.

3. Cuenta General de Tesorería, que ponga de manifiesto la situación del Tesoro y las operaciones realizadas por el mismo durante el ejercicio.

4. Cuenta General de la Deuda Pública.

5. Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

6. Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

7. Programas de Actuaciones, Inversión y Financiación así como los presupuestos de explotación y de capital de las siguientes empresas públicas:

- Valdezcaray, S.A.
- Rioja-92, S.A.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

Los expedientes de modificación presupuestaria presentan diversas irregularidades tanto normativas como de gestión, entre las que se citan su incorrecta presentación en la Cuenta General no concordante con los tipos modificativos legales, defectos de su documentación justificativa, irregularidades de la misma, aplicaciones en las que el remanente final de crédito es superior al importe de lo incrementado y créditos incorporados con escasa o nula utilización.

Existe una falta de cobertura, en la financiación de las incorporaciones de crédito, de 5.384 millones de pesetas.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

- Se produce una falta de aplicación de las normas sobre contabilidad pública referentes a las diferentes fases de contabilización de los gastos, así como una incorrecta imputación temporal de las obligaciones del ejercicio. Al realizarse gastos, superando los créditos aprobados, no se respeta el carácter limitativo de los mismos fijado en el art. 4.1 de la Ley de Presupuestos.

- La Comunidad reconoce derechos en el Cap. 9 por operaciones de endeudamiento sin la efectiva disposición de los fondos correspondientes; como consecuencia de ello los derechos reconocidos en el ejercicio y en ejercicios anteriores se encuentran sobrevalorados en 5.488 y 5.450 millones de pesetas, respectivamente.

- En relación con la contratación administrativa, se destaca:

El 85% del importe total de obras fiscalizadas se ha adjudicado mediante concurso, sin que se haya acreditado la existencia de circunstancias concretas que, pudieran justificar tal procedimiento. Se obtienen con este procedimiento bajas de adjudicación inferiores a la subasta, otorgándose a los órganos de contratación amplios márgenes de discrecionalidad mediante la fijación, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de criterios excesivamente genéricos, sin ordenación alguna.

En la adjudicación de varios contratos mediante al procedimiento de concurso, se ha valorado muy escasamente la economía de las ofertas presentadas, recayendo adjudicaciones a favor de empresas cuyas ofertas se encontraban entre las más elevadas de las presentadas, a pesar de que, en algunos casos, los informes técnicos proponían también como adjudicatarias a otras empresas que habían ofrecido precios más bajos.

Se han producido significativas incidencias en la ejecución de algunos contratos, que ponen de manifiesto una deficiente actuación administrativa.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

Se observa, en el análisis de deudores de ejercicios cerrados, saldos muy antiguos y de escaso movimiento que deberían regularizarse.

Asimismo, se ha adoptado para estos deudores un nuevo sistema de contabilización de ingresos, mediante el que se refunden en una sola agrupación, sin que se disponga auxiliarmente de una información exhaustiva y detallada por ejercicios de procedencia de los mismos, lo que dificulta su análisis global tal como está dispuesto reglamentariamente.

2.1.4.- Operaciones extrapresupuestarias

La Comunidad no registra adecuadamente las operaciones derivadas del IVA en operaciones extrapresupuestarias. Por una parte, contabiliza en el presupuesto de gastos el IVA soportado deducible y, por otra, contabiliza como ingreso del presupuesto del ejercicio IVA repercutido procedente de operaciones extrapresupuestarias por 66 millones de pesetas.

No es posible determinar los ajustes en las cuentas presentadas, ya que dependerá del criterio adoptado por la Administración Tributaria.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

Debido al deficiente sistema de registro, no se han podido comprobar los movimientos de tesorería producidos en el ejercicio, al no disponer del detalle de dichas operaciones que indique su naturaleza presupuestaria o no y el ejercicio de procedencia.

El saldo contable que se refleja en el arqueo, que asciende a 1.291 millones de pesetas negativo (acreedor), no es coincidente con el saldo real que se deriva de los extractos bancarios, que es de 1.541 millones de pesetas positivo (deudor), debiéndose la diferencia a ingresos no registrados en el acta de arqueo.

Existen 115 cuentas con un saldo, al 31-12-90, de 666 millones de pesetas no incluídos en la Tesorería de la Comunidad. Dichas cuentas corresponden a cuentas de pagos librados a justificar y restringidas de ingresos.

Del análisis del endeudamiento por plazo superior a un año, que sirve de cobertura a gastos de inversión, se deduce que el utilizable para 1991 asciende en principio a 8.433 millones de pesetas y no a la cifra de derechos reconocidos pendientes de cobro por este concepto (11.118 millones), dado que deben considerarse caducadas las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

La Comunidad no concreta la aplicación especifica de las operaciones de endeudamiento a proyectos de inversión.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El resultado de la liquidación del ejercicio, capítulos 1 a 7 de la clasificación económica, presenta un déficit de 4.685 millones de pesetas. Este déficit debe aumentarse en 140 millones de pesetas, según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
. Obligaciones del ejercicio aplicadas al presupuesto del ejercicio 1991	—	(140)	(140)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	—	(140)	(140)
OPERACIONES FINANCIERAS			
. Derechos reconocidos indebidamente en el ejercicio por operaciones de endeudamiento	—	(6.488)	(6.488)
. Disposiciones de préstamos registradas en presupuestos cerrados	(1.000)	1.000	—
. Derechos reconocidos en ejercicios anteriores por disposiciones de préstamos no realizadas	(4.450)	—	(4.450)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	(5.450)	(5.488)	(10.938)
TOTAL	(5.450)	(5.628)	(11.078)

En consecuencia el déficit real ajustado del ejercicio por operaciones no financieras es de 4.825 millones de pesetas.

El remanente de tesorería al 31 de diciembre de 1990, que se deriva de la liquidación presupuestaria presentada, asciende a 7.302 millones de pesetas. Este remanente debe disminuirse en 11.078 millones de pesetas, según se detalla en el cuadro anterior, resultando un saldo negativo a dicha fecha de 3.776 millones de pesetas.

3.- EMPRESAS PUBLICAS

Todas las Empresas Públicas han rendido con un retraso superior a 5 meses las cuentas correspondientes a 1990 y sin incluir los programas de actuación, inversiones y financiación. Salvo SAICAR, tampoco han presentado los presupuestos de explotación y de capital.

En estos presupuestos de la Empresa Pública SAICAR, se producen importantes desviaciones entre los datos previstos y los reales. El resultado ordinario ha pasado de un beneficio previsto de 11 millones de pesetas a una pérdida de 24 millones de pesetas, que debido a la aplicación de las subvenciones por importe de 58 millones de pesetas presenta un resultado del ejercicio antes de impuestos de 26 millones de pesetas.

MADRID

1.- OBSERVACIONES GENERALES

a) La Cuenta General se ha rendido dentro del plazo legal establecido en el art. 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, salvo la cuenta de la Asamblea y la del Organismo autónomo "Imprenta de la Comunidad de Madrid", rendida esta última el 30 de marzo de 1993. No se acompaña la "memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos", a que hace referencia el art. 125 de la Ley de Hacienda.

b) Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los arts. 14 y siguientes de la Instrucción sobre información a rendir por los Organismos autónomos, Orden de la Consejería de Hacienda, de 18 de julio de 1990, se observa lo siguiente:

Con carácter general, no se incluye una memoria con los hechos relevantes y las demás especificaciones de la regla 23 de la citada Instrucción, con excepción de la correspondiente al "Instituto de la Vivienda de Madrid".

La "Agencia del Medio Ambiente" no ha presentado relación de deudores.

El "Instituto de la Vivienda de Madrid" no presenta los siguientes estados: balance de situación, cuenta de explotación, cuenta de resultados, cuadro de financiamiento anual, cuadro de variación del fondo de maniobra y estado de la Deuda.

c) En contravención a lo establecido en el art. 127.3 de la Ley de Hacienda, la totalidad de las sociedades mercantiles y Entes públicos dependientes de la Comunidad han rendido sus cuentas con retraso, y previo requerimiento de este Tribunal. No han remitido la ejecución de los programas de actuaciones, inversión y financiación, ni la de los presupuestos de explotación y de capital.

La totalidad de las empresas a que se hace referencia han rendido sus cuentas sin que se tenga constancia del cumplimiento del art. 128.1 de la Ley de Hacienda.

La Memoria y el Informe de gestión no han sido presentados por la empresa "Promoción de Viviendas de la Comunidad de Madrid" (PROVICAM).

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

- El remanente total de crédito del ejercicio supera en 17.535 millones de pesetas al importe neto de las modificaciones presupuestarias.

- Se mantiene la irregular situación de confusión normativa en materia de modificaciones presupuestarias a que se hacía alusión en el Informe correspondiente al ejercicio anterior, realizándose diversas operaciones amparadas en figuras recogidas en la Orden de la Consejería de Hacienda núm. 549/1989 y no autorizadas en la Ley de Presupuestos, vigente en la materia durante todo el ejercicio, por un importe global de 1.535 millones de pesetas.

Asimismo, continúan realizándose modificaciones presupuestarias que no respetan la independiente personalidad jurídica y la autonomía financiera de los Organismos autónomos, sin amparo legal, por un importe global de 10.237 millones de pesetas.

- Existe una falta de cobertura de los créditos incorporados de 25.928 millones de pesetas que podrían quedar compensada por las autorizaciones de endeudamiento del ejercicio anterior por 30.713 millones en la parte que estén financiando créditos incorporados para gastos de inversión.

- El procedimiento para las incorporaciones de crédito regulado en la Orden 222/1990 omite el preceptivo informe favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, para la incorporación de remanentes de crédito no comprometidos, que establece la Ley de presupuestos, por lo que los correspondientes expedientes se han tramitado con omisión del citado informe.

De los créditos finales para operaciones de capital, un 21% proceden de incorporaciones de remanentes del ejercicio anterior (24.350 millones de pesetas), quedando, sin embargo, un 32% de aquéllos como remanentes en fin de ejercicio (37.459 millones). Esta situación indica un desplazamiento temporal de las inversiones con respecto al ejercicio en que se incluyen en los Presupuestos, desvirtuando con ello su carácter anual.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

- Se han reconocido obligaciones por intereses con vencimiento en el ejercicio siguiente por importe de 5.349 millones de pesetas. Análogamente, gastos financieros con vencimiento en el ejercicio habían sido aplicados al presupuesto del anterior, por importe de 2.977 millones de pesetas.

- De los anticipos de caja efectuados durante el ejercicio al amparo del art. 27 de la Ley de presupuestos el concedido al Organismo autónomo "Imprenta de la Comunidad de Madrid", por 100 millones de pesetas, no incluye en el expediente los preceptivos informes de la Dirección General de Política Financiera ni de la Intervención General, incumpliéndose el requisito del reintegro previo del concedido en ejercicios precedentes.

El anticipo concedido a la empresa "Informática de la Comunidad de Madrid, S.A.", por 215 millones de pesetas, fue aprobado sin informe de fiscalización y sin previo reintegro del anticipo anterior. En fin de ejercicio no se ha producido el reintegro de su importe.

Quedan pendientes de reintegro, por otra parte, los anticipos concedidos en 1988 y 1989 al Organismo autónomo "Servicio Regional de Compras", por importes de 310 y 160 millones de pesetas, respectivamente.

- La Comunidad reconoce los derechos por endeudamiento indebidamente cuando se autoriza éste por el Consejo de Gobierno y no cuando se exige su efectiva disposición. En 1990 se han dispuesto diversas operaciones por 13.060 millones de pesetas reconocidas en el ejercicio anterior.

Por otro lado se han registrado también indebidamente en operaciones extrapresupuestarias emisiones de pagarés a corto en virtud de una autorización del Consejo de Gobierno para endeudarse a largo plazo que deberían haberse contabilizado en el presupuesto por 33.022 millones de pesetas.

- En relación con la contratación administrativa se indica:

a) Contratos adjudicados mediante subasta

En el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato "Acondicionamiento de la REDA a Torrejón de Ardoz-zona 1ª limitada Avda. de Madrid-Virgen de Loreto", cuya adjudicación debía realizarse mediante subasta con admisión previa, no se establecieron con precisión y claridad los criterios objetivos que hubieran de regular dicha admisión, infringiéndose, por tanto, los párrafos 2º y 4º del art. 110 del RGC. Dicha irregularidad adquiere especial relevancia ya que, posteriormente, fueron excluidas tres empresas en el referido trámite, lo que impidió conocer sus propuestas económicas.

b) Contratos adjudicados mediante concurso

El 73% del importe global de los contratos de obras fiscalizados de la Administración General y sus Organismos autónomos se ha adjudicado mediante concurso, en el que las bajas obtenidas han sido inferiores a las alcanzadas por el sistema de subasta, sin que se haya acreditado la existencia de circunstancias concretas que, pudieran justificar la utilización de tal procedimiento, otorgándose a los órganos de contratación amplios márgenes de discrecionalidad mediante la fijación, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, de criterios de adjudicación, algunas veces cambiantes y excesivamente genéricos, que no siempre fueron correctamente valorados ni respetados en las adjudicaciones recaídas. En particular:

Se atribuyó a los propios contratistas la redacción de los proyectos y sus respectivos presupuestos y la ejecución de las obras correspondientes en 2 obras adjudicadas por un importe total de 3.575 millones de pesetas, sin que se haya justificado la imposibilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma para elaborar, por sus propios medios, los referidos proyectos y presupuestos.

En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de 20 contratos, únicamente figuran algunos criterios, expresados de forma genérica, ambigua e imprecisa, sin ordenación de su importancia y sin que consten ni se acrediten las circunstancias que pudieran justificar la imposibilidad de tal ordenación, contemplada en el párrafo 3º del art. 115 del R.G.C. La importancia de la fijación, en los Pliegos de Cláusulas Particulares de los contratos adjudicados por concurso, de criterios básicos para la selección de adjudicatario es absoluta y esencial para garantizar una elección objetiva del contratista.

En el procedimiento de adjudicación por concurso de tres contratos, la valoración de las ofertas presentadas mediante los informes técnicos correspondientes no se realizó de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares ni se respetó la ordenación de los mismos.

c) Contratos adjudicados directamente

Se ha invocado la urgencia prevista en el núm. 2 del art. 37 de la L.C.E. como causa de la adjudicación directa de 5 contratos; sin embargo, en sus respectivos expedientes no consta la acreditación de las circunstancias específicas que afectaron a cada obra concreta y cuya previsión no pudiera realizarse con la antelación suficiente como para adjudicar las obras mediante la tramitación urgente.

d) Ejecución de los contratos

En la ejecución de los contratos fiscalizados, se han observado numerosas incidencias, que provocaron significativos retrasos, y se han efectuado abonos a cuenta sin la adecuada documentación justificativa, cuya deducción posterior no ha resultado plenamente acreditada. Se citan: En la ejecución de 36 contratos se han producido numerosos retrasos o paralizaciones, sin que se haya acreditado la concesión de las necesarias prórrogas o la declaración de suspensión de las respectivas obras, o justificado adecuadamente sus causas, destacándose especialmente 16, cuya ejecución ha experimentado retrasos de más de 6 meses y, muy en particular, 4 de ellos, cuyas obras se retrasaron más de 1 año.

La ejecución de las obras correspondientes a 7 contratos se retrasó notablemente por la indisponibilidad y falta de posesión de los terrenos necesarios, a pesar de que en algunos de ellos constan sendas certificaciones de disponibilidad expedidas con anterioridad a su adjudicación, lo que revela una deficiente gestión de las expropiaciones pertinentes, con el consiguiente encarecimiento de las obras por la incidencia del tiempo de paralización de las mismas en la aplicación de las correspondientes cláusulas de revisión de precios.

En 2 contratos se abonaron a las empresas adjudicatarias 44 millones de pesetas en concepto de acopios mediante certificaciones fechadas a 31 de diciembre de 1990, siendo la valoración de dichos acopios, que se fijó en el contrato de cesión de sus respectivas obras, fechado el 26 de diciembre de 1991, tan sólo de 742.000 Ptas. no habiéndose expedido entre ambas fechas certificación ordinaria alguna por obra ejecutada.

De acuerdo con los documentos que acompañan a las certificaciones mediante las cuales se hicieron efectivos los abonos a cuenta, sus respectivos importes no respetaron el límite máximo del 75% del valor de los materiales acopiados, infringiéndose, en consecuencia la Cláusula 54 del P.C.A.G., ni se fijaron de acuerdo con los porcentajes máximos establecidos en la Cláusula 55 de dicho Pliego para la valoración de instalaciones y equipos.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

- De los saldos acreedores de la agrupación de presupuestos cerrados 1.898 millones debieron ser objeto de regularización debido a que no constituyen deudas exigibles.

- Se han producido modificaciones de saldos de deudores de presupuestos cerrados correspondientes a derechos reconocidos indebidamente en ejercicios anteriores por 5.535 millones de pesetas que disminuyen el remanente de tesorería del ejercicio en dicho importe.

- El saldo de derechos pendientes de cobro por los recargos sobre licencias fiscales de tributos locales queda sujeto a la incertidumbre derivada del criterio seguido para su reconocimiento, sobre base estimativa. De los antecedentes consultados se deduce, no obstante, que los importes reconocidos hasta la fecha son notablemente inferiores a los reales.

- Se ha constatado una deficiente gestión de cobro de los ingresos en vía de apremio, acumulándose deudores por "multas" y "sanciones en materia de consumo".

- Están pendientes de cobro saldos de deudores por derechos reconocidos indebidamente en el presupuesto de ejercicios anteriores por operaciones de endeudamiento que deben anularse por 16.584 millones de pesetas.

- Figuran reconocidos como derechos de cobro de ejercicios cerrados 1.403 millones de pesetas que debieran ser objeto de regularización.

2.1.4.- Operaciones extrapresupuestarias

- Se han imputado al presupuesto de ingresos 900 millones de pesetas, producto de una regularización de saldos extrapresupuestarios representativos de cuotas adeudadas a la Seguridad Social y a la MUNPAL así como de ingresos pendientes de aplicación en cuentas restringidas de recaudación, sin soporte documental adecuadamente autorizado e intervenido. De igual forma, 83 millones de pesetas fueron aplicados a la agrupación de ejercicios cerrados.

- El endeudamiento a corto plazo en fin de ejercicio alcanza 20.549 millones de pesetas, al amparo de lo dispuesto en el art. 26.b) de la Ley de presupuestos, que no establece limitación de su importe. Simultáneamente, las inversiones financieras temporales, realizadas en virtud del art. 26.1 de la misma Ley, ascienden a 9.891 millones de pesetas, con la finalidad de colocar excedentes transitorios de tesorería.

- La cuenta "Gastos pendientes de formalizar a presupuesto", con un saldo en fin de ejercicio de 1.393 millones, debiera tener, en todo caso, naturaleza puramente transitoria, cancelándose su saldo en fin de ejercicio.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

- Los registros contables de la Comunidad no ofrecen información suficiente acerca de la situación, variaciones y composición del inmovilizado, tanto material como inmaterial y financiero.

- Las existencias finales de tesorería en cuentas de arqueo reflejan un menor importe de 2.296 millones de pesetas, correspondientes a pagos presupuestarios del ejercicio 1989 imputables al Organismo "Agencia del Medio Ambiente".

- Se han detectado diversas deficiencias de control en la disposición de fondos de las distintas cuentas de tesorería.

- El control interno de pagos presenta deficiencias particularmente en los procedimientos de archivo y el control de los movimientos interbancarios.

- No ha sido facilitada información completa y suficiente acerca de las cuentas denominadas de transferencias, pagos a justificar, anticipos de caja fija y restringidas de recaudación.

- El "estado de la deuda pública y operaciones de crédito" contenido en la Cuenta General es insuficientemente informativo, no constando las disposiciones de crédito realizadas durante el ejercicio ni todas las amortizaciones anticipadas.

- Los acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de junio y 20 de diciembre de 1990, autorizan la "refinanciación" de operaciones por un importe total de 50.000 millones de pesetas. No obstante, algunas de las citadas operaciones objeto de "refinanciación no estaban formalizadas o, estándolo, no se había producido su disposición. Por otra parte, en aquellos casos en que se había efectuado la disposición, la amortización anticipada se realizó con varios meses de antelación a la aprobación de la autorización para su "refinanciación".

- Las autorizaciones de endeudamiento del ejercicio sólo han sido utilizadas en un 54%. En cuanto a la aplicación de estos fondos dispuestos a créditos para gastos de inversión, no ha sido posible su comprobación debido a su falta de especificación en los proyectos de inversión.

- El estado demostrativo de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, es incompleto, ya que no consta en todos los casos el detalle de los ejercicios posteriores a 1993, ni el total de compromisos futuros por cada proyecto.

Asimismo, se han detectado diversos expedientes aprobados sin previo informe fiscal, por 490 millones de pesetas.

- El estado de avales incluido en la Cuenta General es insuficiente desde un punto de vista informativo, impidiendo una adecuada estimación del riesgo asumido, ni figurando, por lo menos, el aval vigente concedido a la empresa "Informática de la Comunidad de Madrid", por un importe inicial de 150 millones de pesetas.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps. 1 a 7) derivado de la liquidación presupuestaria, determina un déficit de 44.690 millones de pesetas. No obstante dicho déficit debe disminuirse en 815 millones según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
Intereses no vencidos	—	5.349	5.349
Gastos financieros imputados a ejercicios anteriores	2.977	(2977)	—
Diferencias de cambio negativas aplicadas a concepto inadecuado	—	(1.907)	(1.907)
Ingresos no aplicados	6	92	98
Diferencias de cambio positivas no aplicadas a presupuesto	187	258	445
Subvenciones 1987	379	—	379
Conceptos anteriores a 1986	(1.403)	—	(1.403)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.146	815	2.961
OPERACIONES FINANCIERAS			
Préstamos concedidos, no aplicados a presupuesto	—	(139)	(139)
Diferencias de cambio negativas aplicadas a concepto inadecuado	—	19.07	1.907
Reintegros de préstamos concedidos, no aplicados	—	235	235
Endeudamiento reconocido indebidamente	(13.060)	(14.900)	(27.960)
Fondos de reserva	1.519	—	1.519
Rectificaciones de saldos de presupuestos cerrados (deudores)	(5.535)	5.535	—
Operaciones de endeudamiento no dispuestas registradas en presupuestos cerrados	(16.584)	—	(16.584)
Amortizaciones de operaciones consideradas de refinanciación	(30.421)	(6.579)	(37.000)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	(64.081)	(13.941)	(78.022)
TOTAL	(61.935)	(13.126)	(75.061)

En definitiva, el resultado por operaciones no financieras del ejercicio 1990 ajustado presenta un déficit de 43.875 millones de pesetas, inferior al previsto, por la falta principalmente de la ejecución de las operaciones de capital previstas presupuestariamente. En estas cifras no se incluye las obligaciones del capítulo cero, que ascienden a 342 millones de pesetas.

- El remanente de tesorería al final del ejercicio, según las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 34.981 millones de pesetas.

Dicho remanente debe disminuirse en 75.061 millones de pesetas según el detalle que se muestra en el cuadro anterior, lo que determina un saldo negativo de 40.080 millones.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- Análogamente a lo ya indicado para la Administración General, los presupuestos de los distintos Organismos se ven afectados por la realización de modificaciones "mixtas".

Asimismo, se efectúan modificaciones presupuestarias bajo la figura de "generación por reconocimiento de derechos" y "habilitación con remanente de tesorería", inexistentes en la Ley de presupuestos.

- Persiste la ordenación de los pagos de los Organismos integrados en la tesorería centralizada por el Tesorero General de la Comunidad, lo que contraviene lo dispuesto en el art. 13.2.i) de la Ley 1/1984, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid y en el art. 69.2 de la nueva Ley de Hacienda.

- De acuerdo con la regla 11 de la Orden de la Consejería de Hacienda 1703/1990, las devoluciones de ingresos de ejercicios cerrados deben contabilizarse como minoración de la recaudación líquida de ejercicio corriente. No obstante, en el "Servicio Regional de la Salud", la "Agencia del Medio Ambiente" y el "Instituto Madrileño para el Deporte, el Esparcimiento y la Recreación" se han contabilizado en la cuenta de liquidación, como minoración de la recaudación de ejercicios cerrados.

- Las cifras de la cuenta de tesorería correspondiente al Servicio Regional de Bienestar Social presentan ciertas discrepancias con las incluidas en la liquidación presupuestaria, que obedecen a una incorrecta contabilización de la tesorería.

- La contabilización del Impuesto sobre el Valor Añadido en el Consorcio Regional de Transportes es inadecuada, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 30 de junio de 1986.

- El Instituto de la Vivienda de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes mantienen inversiones financieras temporales por importes respectivos de 1.073 y 1.801 millones de pesetas, incluidas dentro de las existencias finales de tesorería, que deben contabilizarse como deudores extrapresupuestarios.

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

- Conforme a lo dispuesto en el art. 163.1 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran incursas en el supuesto de reducción obligatoria del capital social, por disminución de su haber por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social, mantenida durante al menos un ejercicio económico, las empresas "Mercado Puerta de Toledo", "Televisión Autonomía Madrid, S.A.", y "Radio Autonomía de Madrid, S.A.".

- Presentan un fondo de maniobra negativo las empresas "Instituto Madrileño de Desarrollo" (252 millones), "Centro de Transportes de Coslada" (10 millones) y "Metro de Madrid, S.A." (2.778 millones), lo que revela una situación de comprometida liquidez a corto plazo.

- El grupo empresarial configurado para la gestión del servicio público de radiodifusión y televisión, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1º y 12º de la Ley 13/1984, de 30 de junio, presenta un patrimonio neto negativo de 9.659 millones de pesetas, ascendiendo las pérdidas consolidadas del ejercicio a 6.311 millones, lo que representa un 95% de incremento sobre las pérdidas consolidadas del ejercicio anterior. Asimismo, el balance consolidado pone de manifiesto un fondo de maniobra negativo de 4.100 millones de pesetas.

- Las transferencias de capital deben aplicarse a resultados de acuerdo con el ritmo de amortización de los bienes cuya adquisición han financiado, conforme a los criterios contables.

Sin embargo, en el Ente público "Radiotelevisión Madrid", se produjo la inadecuada aplicación de 104 millones de pesetas desde la partida de "ingresos a distribuir en varios ejercicios", con la finalidad de sanear pérdidas de ejercicios anteriores. Análogamente han procedido las sociedades "Televisión Autonomía Madrid, S.A." y "Radio Autonomía de Madrid, S.A.", por 262 y 99 millones de pesetas, respectivamente.

La sociedad "Metro de Madrid, S.A.", sigue el criterio erróneo de presentar las transferencias de capital entre los fondos propios.

- La sociedad "Hidráulica Santillana, S.A." no dispone de un detalle de los elementos del inmovilizado adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1982, lo que impide el adecuado conocimiento del coste de adquisición de tales elementos.

PAÍS VASCO

1.- OBSERVACIONES GENERALES

El Plan de Contabilidad Pública aprobado por Orden del Departamento de Economía y Hacienda de 17 de diciembre de 1985, en vigor desde el ejercicio 1986, no ha sido efectivamente implantado.

No se incluye en la Cuenta General la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. Los objetivos de los programas presupuestarios no están cuantificados y se identifican con las funciones a realizar, no permitiendo el control de eficacia y economía.

El informe elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no hace mención acerca de la rendición de las cuentas en plazo.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

Se ha detectado el incumplimiento de determinados apartados del art. 30 de la Ley 10/1989, de Presupuestos Generales para 1990, sobre información trimestral que debe ser remitida a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco.

2.1.1.- Presupuesto corriente

Modificaciones de crédito

Se han detectado, entre otras, las siguientes irregularidades:

- Habilitaciones o generaciones de crédito por ingresos destinadas a la partida "crédito global", en contravención del art. 93.3 de la Ley 31/1983, por importe de 190 millones de pesetas.

- Modificaciones realizadas al amparo del régimen de convenios, regulado en los artículos 115 a 121 de la Ley 31/1983, vulnerando lo establecido en los artículos 115 y 117 de la misma, al haberse realizado sin la debida recepción de fondos adicionales a los inicialmente previstos.

- Se han realizado incorporaciones de remanentes de crédito en tres secciones por encima del existente en el presupuesto del ejercicio anterior, lo que indica que proceden de otras secciones, con incumplimiento del art. 101.1 de la Ley 31/1983. Asimismo se han incorporado créditos para gastos corrientes, vulnerando el art. 100.2.

- Se han realizado transferencias en las que no se ha respetado su regulación en los art. 68 a 85 de la Ley 31/1983 y en el art. 2 de la Ley 10/1989.

- Se ha incumplido el art. 2.6 de la Ley 10/1989, que prescribe un incremento máximo del crédito global del 1,5%, siendo el efectivamente producido del 2,5%.

Ejecución del presupuesto de gastos

Las contrataciones de sustitutos docentes por el Departamento de Educación han sido realizadas sin suficiente consignación presupuestaria, con incumplimiento del art. 20 de la Ley 31/1983, de Régimen Presupuestario.

En materia de contratación administrativa, se han detectado diversos incumplimientos de la normativa vigente: adjudicación verbal de un contrato, exención del requisito de clasificación exigible a los licitadores en otro, ausencia de expedientes de modificado, modificados realizados sin autorización previa y prestación del servicio anterior a la adjudicación definitiva.

Se han reconocido obligaciones por gastos de personal, por importe de 137 millones de pesetas, que hubiera correspondido imputar al ejercicio anterior.

Asimismo, se han detectado en capítulo 6 obligaciones reconocidas por adquisición de inmuebles y suministros imputadas erróneamente a ejercicio distinto al que corresponden, que suponen, en su conjunto, un incremento del remanente de tesorería inicial de 743 millones de pesetas y una disminución del resultado presupuestario en 181 millones.

En relación con las transferencias, tanto corrientes como de capital, reiteramos las consideraciones manifestadas en el Informe Anual correspondiente al ejercicio 1989, en el sentido de que el reconocimiento de obligaciones debe verificarse en el momento en que se acredite de conformidad el cumplimiento de los requisitos para el pago establecidos en las normas reguladoras.

Se han reconocido obligaciones por importe de 338 millones de pesetas, correspondientes a convenios de Cooperación con el Tercer Mundo, formalizados con posterioridad al cierre del ejercicio. Por otra parte, se reconocieron obligaciones por 481 millones en el ejercicio 1989, con la finalidad de atender la ayuda extraordinaria concedida a CONELEC y CENEMESA que debieran haberse imputado al ejercicio 1990.

El préstamo concedido en 1985 a la empresa ASKOREN, S.A., de 22 millones de pesetas, ha sido aplicado a presupuesto durante el ejercicio, figurando hasta entonces como deudor extrapresupuestario.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas recomienda el tratamiento extrapresupuestario del pago de los acopios de materiales en contratos de obras, así como de los desembolsos realizados en la suscripción de acciones, mientras no se escriture la correspondiente ampliación.

Este Tribunal no considera conforme el indicado criterio con los principios establecidos en el art. 124 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi y en los arts. 45 y 46 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Ejecución del presupuesto de ingresos

Se han detectado algunas incorrecciones en el registro temporal de los derechos reconocidos por avales, así como la duplicación de los correspondientes a los contraavales cobrados de las Diputaciones Forales.

2.1.2.- Presupuestos cerrados

Del total de anulaciones registradas en el estado de derechos a cobrar, que ascienden a 639 millones de pesetas, 409 millones corresponden al concepto "Sanciones de Tráfico", como consecuencia de su paso a vía de apremio, siendo, simultáneamente, alta en presupuesto corriente. Este Tribunal no considera correcto este procedimiento.

Las anulaciones de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores ascienden a 4.043 millones de pesetas. De este importe, 3.463 millones corresponden a transferencias de capital, y 375 millones a transferencias corrientes, lo que pone de manifiesto el incorrecto criterio seguido en el reconocimiento.

2.1.3.- Operaciones extrapresupuestarias

Se han registrado anulaciones de acreedores extrapresupuestarios, por importe de 1.449 millones de pesetas, que hubieran debido cancelarse con aplicación al presupuesto de ingresos.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

Durante el ejercicio se ha implantado un inventario de bienes y derechos, si bien no contempla los bienes muebles y presenta deficiencias en el registro de los inmuebles.

Las cuentas autorizadas de ingresos, gastos y depósitos no figuran adecuadamente registradas contablemente, presentándose una diferencia de 476 millones entre el saldo contable y el real, originada por retrasos en la contabilización. Por otra parte, se ha detectado la existencia de firmas solidarias en algunas cuentas, situación que incumple el art. 6.4 del Decreto 99/1982. Asimismo, figuran, en ocasiones, personas con firma autorizada que no prestaban servicios en la Administración General durante 1990.

La cuenta de tesorería no incluye la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya que recoge las aportaciones de las distintas Administraciones para la realización de obras en el metro de Bilbao, ascendiendo su saldo en fin de ejercicio a 999 millones de pesetas.

Se han detectado en el "estado de créditos de compromiso" deficiencias contables tanto con los límites autorizados por la Ley de Presupuestos como en el importe total de los gastos comprometidos que no coinciden con la información suministrada por los distintos Departamentos. Permanecen las deficiencias ya detectadas en ejercicios anteriores en el sentido de la ausencia de diferenciación entre las fases de autorización y disposición así como del registro histórico de las variaciones en la distribución plurianual.

Se han concedido avales a empresas cuya estabilidad económico-financiera no está suficientemente garantizada, particularmente dentro de la línea del Plan de Relanzamiento Excepcional.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras presenta un déficit de 28.128 millones de pesetas, disminuido por el saldo neto de anulaciones de presupuestos cerrados, que asciende a 3.409 millones de pesetas, totalizando un déficit no financiero de 24.727 millones de pesetas. No obstante, este importe se ve afectado por los ajustes 1 a 9, de entre los que se relacionan a continuación, incrementándose en 444 millones de pesetas, por lo que el déficit no financiero ascendería a 25.171 millones de pesetas.

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
1. Gastos de personal imputados al ejercicio, correspondientes al anterior	(137)	137	—
2. Obligaciones por inversiones, imputadas a ejercicio distinto del que les corresponde	743	(181)	562
3. Mayores ingresos por becas universitarias devueltas y financieros, correspondientes al ejercicio anterior	10	(10)	—
4. Convenios de cooperación formalizados con posterioridad al cierre del ejercicio	—	338	338
5. Subvenciones de capital correspondientes al ejercicio, reconocidas en ejercicios anteriores	481	(481)	—
6. Derechos indebidamente traspasados al ejercicio corrientes	409	(409)	—
7. Avales fallidos en 1989, reconocido el derecho en 1990	49	(49)	—
8. Avales fallidos en 1990, no reconocido el derecho	—	345	345
9. Derechos duplicados, por los contraavales cobrados de Diputaciones Forales	(28)	(134)	(162)
10. Préstamo aplicado al ejercicio, concedido en ejercicios anteriores	(22)	22	—
TOTAL	1.505	(422)	1.083

El remanente de tesorería, que contablemente asciende a 29.528 millones de pesetas, teniendo en cuenta los ajustes anteriores, por 1.083 millones de pesetas, resultaría de 30.611 millones de pesetas.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

3.1.- SERVICIO VASCO DE SALUD

Organismo autónomo de naturaleza administrativa creado por Ley 10/1983, de 19 de mayo.

La memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, prevista en el art. 137 de la Ley 31/1983, no ha sido presentada.

La totalidad de los gastos de personal se han contabilizado sin la preceptiva fiscalización. Asimismo, se han observado deficiencias en materia de contratación de personal temporal.

Durante el ejercicio se han contraído obligaciones por gastos de funcionamiento sin consignación presupuestaria por valor de 2.715 millones de pesetas.

Se han observado deficiencias en las facturaciones realizadas por prestaciones de servicios, así como en la gestión de cobro. Así, se estiman de difícil realización derechos reconocidos por importe de 675 millones de pesetas.

No dispone de un plan actuarial que estime el pasivo devengado por los complementos de jubilación del personal estatutario no facultativo.

La financiación del Organismo proviene fundamentalmente de transferencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que suponen el 98% de los derechos reconocidos.

3.2.- OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Son los siguientes:

Administrativos

"Instituto Vasco de Estadística" (EUSTAT).

"Instituto Vasco de Administración Pública" (IVAP).

"Instituto de Alfabetización y Reeuskaldumización de Alumnos" (HABE).

"Instituto Vasco de la Mujer" (EMAKUNDE).

"Instituto Vasco de Educación Física" (IVEF).

Comerciales

"Centro de Contratación de Cargas".

Con carácter general, las deficiencias detectadas hacen alusión, entre otros, a los siguientes extremos:

- Carencia de inventarios de inmovilizado, lo que imposibilita su adecuado control y la implantación de una contabilidad patrimonial.

- Las liquidaciones presupuestarias presentadas no incluyen las fases de aprobación y disposición de los gastos.

En particular, se han detectado entre las deficiencias más relevantes:

- En el IVAP se ha aplicado el procedimiento de contratación por adjudicación directa en un contrato por 105 millones de pesetas en el que debería haberse aplicado el sistema de concurso. En otro contrato, por 7 millones, no consta la solicitud de tres ofertas. Asimismo, se han contraído obligaciones sin consignación presupuestaria por 17 millones, al tiempo que se han reconocido otras, por 53 millones, que debieran figurar en la fase de disposición.

- En el HABE, la documentación remitida por los euskaltegis municipales como justificación de las subvenciones recibidas no es suficiente para llevar un adecuado control de la aplicación de las subvenciones a su finalidad. Asimismo, facturas emitidas por diversos proveedores no cumplen los requisitos formales exigidos por la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El Organismo autónomo "Centro de Contratación de Cargas" ha sido declarado extinto por la Ley de Presupuestos Generales para 1991.

4.- EMPRESAS PUBLICAS

El subsector está constituido por 36 entidades, cuyos activos agregados ascienden a 78.524 millones de pesetas en fin de ejercicio, alcanzando sus pérdidas agregadas, después de subvenciones e impuestos, 2.568 millones de pesetas.

Las subvenciones recibidas, fundamentalmente de la Administración General, ascienden a 12.943 millones de pesetas, las aplicadas a la explotación, y a 1.394 millones las subvenciones de capital.

No se han presentado cuentas consolidadas de los grupos de sociedades dependientes siguientes:

- Grupo dependiente del Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB).

- Grupo dependiente del Ente Vasco de la Energía (EVE).

- Grupo dependiente de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.

Los PAIF no recogen suficientemente la evolución y evaluación de los objetivos perseguidos y su grado de ejecución.

El endeudamiento del conjunto de entidades alcanza un total de 12.628 millones de pesetas, de los cuales 1.737 son a corto plazo. La devolución de los préstamos depende de las subvenciones en Ferrocarriles Vascos, S.A. y en la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.- OBSERVACIONES GENERALES

- Las cuentas de la Administración General y sus Organismos autónomos se han rendido a este Tribunal el día 18 de noviembre de 1991, fuera del plazo legal establecido en el art. 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

No existe un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestaria al no aplicarse el Plan General de Contabilidad Pública.

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o sistemas de seguimiento y control susceptibles de valoración monetaria.

- Las cuentas de las Empresas públicas han sido rendidas sin formar parte de la Cuenta General con fecha 3 de agosto de 1992 y, por tanto, fuera del plazo establecido en el art. 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Por excepción, no han sido presentadas las cuentas de las empresas en cuyo capital participa mayoritariamente la "Sociedad de Promoción del Principado de Asturias, S.A.".

No han sido presentados los Presupuestos de Explotación y Capital ni los Programas de Actuación, Inversión y Financiación, incumpliendo el art. 35.5 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

Se detectan irregularidades en relación a los expedientes de modificación de crédito aprobados, que denotan en unos casos la falta del cumplimiento de las normas sobre tramitación y aprobación de expedientes y en otras una deficiente gestión presupuestaria. Así:

- Existe una falta de cobertura en la financiación de las modificaciones por 9.131 millones de pesetas.
- Los Informes desfavorables de la Intervención tienen fecha posterior a la aprobación del expediente.
- Se han efectuado incorporaciones de crédito en rúbricas diferentes a aquellas de las que proceden.
- Se ha aprobado una generación de crédito por ingresos financiada con endeudamiento a corto plazo que importa 3.000 millones de pesetas.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

- No se reconocen las obligaciones por amortizaciones e intereses derivadas de operaciones de endeudamiento en el momento de su vencimiento, conforme al principio del devengo.

- Igualmente se produce una incorrecta contabilización de los derechos reconocidos por dichas operaciones al reflejarse los mismos por el importe de las autorizaciones de endeudamiento sin haberse efectuado la disposición de los préstamos.

- Sobre la contratación administrativa, se indica:

En 7 expedientes correspondientes a fases parciales, segregados o terminación de obras, no se han aportado las correspondientes autorizaciones, debidamente motivadas, por las que se hubiera permitido el fraccionamiento de una obra total en varios proyectos independientes para cada una de sus partes, autorizaciones preceptivas a tenor de los arts. 21 de la L.C.E. y 59 de su Reglamento.

Tampoco se han expresado las circunstancias excepcionales que hubieran podido justificar el fraccionamiento que se observa en el contrato cuyo objeto fue la realización de la 1ª Fase de las "Obras en la Casa de los García, en Tineo", abarcando dicha fase las obras de consolidación estructural, adjudicándose posteriormente las de adecuación del edificio para casa de la cultura en una 2ª Fase, habida cuenta que, para considerar completa dicha obra, es decir, "susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente" resulta evidente que ambas fases eran necesarias e inseparables.

El 73% del importe total de los contratos de obras fiscalizados se ha adjudicado mediante concurso, y no por el sistema de subasta, en el que las bajas obtenidas son superiores, sin que en ninguno se hayan acreditado la existencia de circunstancias concretas que pudieran justificar tal procedimiento, otorgándose en varios casos a los órganos de contratación amplios márgenes de discrecionalidad mediante la fijación, en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, de criterios excesivamente genéricos, sin ordenación alguna.

Los contratos "Ubicación de equipamientos de Litroticia y Resonancia magnética, MGA" y "Obras de refuerzo y separación del espaldar del Tramo final del Espolón del Puerto de Cudillero" fueron adjudicados directamente, invocándose la existencia de "reconocida urgencia" que posteriormente no fue coherente con la tramitación de los expedientes o la duración de la ejecución de sus correspondientes obras.

- La ejecución de las obras correspondientes a 4 contratos se retrasó notablemente por la indisponibilidad y falta de posesión de los terrenos necesarios, lo que repercutió en el encarecimiento de las obras por la aplicación, en su caso, de las correspondientes cláusulas de revisión de precios.

- La ejecución del contrato que tiene por objeto las "Obras de Cambio de Servicio Afectado de Abastecimiento de Agua en la Carretera de Trubia a Proaza", y que se adjudicó a la empresa cuya oferta era la de mayor precio de las presentadas, al haber ofrecido una reducción del plazo de ejecución de 6 meses sobre los 12 meses previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, experimentó retrasos por haberse concedido al contratista dos prórrogas, de 3 meses y medio cada una de ellas, y haberse suspendido temporalmente la ejecución durante 5 meses y quince días.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

En acreedores de presupuestos cerrados se recogen como aumentos las devoluciones de ingresos, al no disponer la Comunidad de un subsistema informático específico para contabilizar estas operaciones.

Existen saldos de presupuestos cerrados antiguos y de escaso movimiento, que haría necesario un análisis de los mismos para una posible depuración.

2.1.4.- Operaciones extrapresupuestarias

Igualmente existen saldos acreedores de operaciones extrapresupuestarias con escaso movimiento o de signo contrario a su naturaleza, que hace necesario un estudio de los mismos para su posible depuración y regularización.

La Comunidad no registra adecuadamente las operaciones derivadas del IVA en cuentas extrapresupuestarias. Por una parte contabiliza en el presupuesto de gastos el IVA soportado deducible, y por otra, contabiliza en operaciones extrapresupuestarias parte del IVA repercutido. Dado que las liquidaciones presentadas en 1989 y 1990 han sido revisadas por la Administración tributaria, resultando unas cantidades a devolver de 44 y 63 millones de pesetas, respectivamente, procede registrar dichos importes en cuentas deudoras y anular los saldos acreedores.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

Existen 210 cuentas de pagos a justificar y restringidas de recaudación, con un saldo al final del ejercicio de 1.728 millones de pesetas, que deben ser objeto de inclusión en la Tesorería de la Comunidad.

Del análisis del endeudamiento por plazo superior a un año, que sirve de cobertura a los gastos de inversión, se deduce que el endeudamiento utilizable para 1991 asciende en principio a 9.155 millones de pesetas, dado que deben considerarse caducadas las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

La Comunidad no concreta la aplicación específica de las operaciones de endeudamiento a proyectos de inversión.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps. 1 a 7), derivado de la liquidación presupuestaria, determina un déficit de 11.437 millones de pesetas.

No obstante, dicho déficit debe disminuirse en 989 millones, según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
Intereses de préstamos no reconocidos	—	(272)	(272)
Intereses de empréstitos reconocidos en 1990 y correspondientes a 1989	(70)	70	—
Devoluciones de ingresos contabilizados como modificaciones de acreedores de presupuestos cerrados	—	1.254	1.254
IVA a devolver	243	169	412
Servicio Médico-Farmacéutico	—	(232)	(232)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173	989	1.162
OPERACIONES FINANCIERAS			
Amortizaciones de empréstitos y préstamos no reconocidos	—	(194)	(194)
Derechos reconocidos por operaciones de endeudamiento sin disponer	—	(9.155)	(9.155)
Disposiciones de operaciones de endeudamiento del ejercicio reconocidos en 1989	(6.185)	6.185	—
Derechos reconocidos en ejercicios anteriores por operaciones de endeudamiento no dispuestas	(1.315)	9	(1.306)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	(7.500)	(3.155)	(10.655)
TOTAL AJUSTES	(7.327)	(2.166)	(9.493)

Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 10.448 millones de pesetas, inferior al previsto en sus presupuestos (24.271 millones). Esta diferencia es debida principalmente a la falta de ejecución de las operaciones de capital.

El remanente de tesorería al final del ejercicio, según las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 14.659 millones de pesetas. Dicho remanente debe disminuirse en 9.493 millones, según se indica en el cuadro anterior, presentando un saldo al 31 de diciembre de 1990 de 5.166 millones de pesetas.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

Se observa en relación a los Organismos autónomos el escaso o nulo desarrollo de las actividades para cuyo fin fueron creados, destacando el bajo grado de ejecución en los Organismos "Instituto de Fomento Regional", "Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias" y "Consejo Económico y Social", así como la inexistencia de operaciones de ningún tipo en el Organismo "Comisión Regional del Banco de Tierras".

4.- EMPRESAS PUBLICAS

Las Empresas públicas han formulado las cuentas anuales rendidas, según modelos completos o abreviados, observándose falta de información en las memorias de algunas en relación con la especificación de las bases de presentación de las cuentas y en los criterios de imputación de las subvenciones de capital.

La Empresa pública "Sociedad de Promoción del Principado de Asturias, S.A." arroja unos resultados negativos por importe de 142 millones de pesetas a pesar de las subvenciones recibidas, debido en buena parte a las provisiones que han sido necesarias dotar para hacer frente a los riesgos derivados de las empresas con dificultades económicas con las que se relaciona, tanto por participaciones en capital como por préstamos y avales concedidos a aquéllas.

El resto de las Empresas públicas obtiene beneficios, si bien los de "Productora de Programas de Principado de Asturias" y los de la "Sociedad Regional de Reconversión" son debidos a las subvenciones aplicadas a resultados.

Destaca en la "Sociedad Regional de Reconversión, S.A." su escaso volumen de actividad así como la peculiar naturaleza de sus actividades principales de mera intermediación de la Comunidad, dirigida fundamentalmente a la tramitación de subvenciones a conceder por el Principado a las sociedades solicitantes.

Todo ello determina la necesidad de plantearse la existencia de esta empresa, ya que las actividades citadas podrían ser desarrolladas con mayor eficiencia por las propias Consejerías que otorgan las subvenciones.

REGIÓN DE MURCIA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

- La Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio de 1990, fue remitida a este Tribunal con fecha 20 de febrero de 1992, con una demora aproximada de 4 meses respecto al plazo establecido en el art. 35 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

No se acompaña a la cuenta General un estado en el que se refleje el movimiento y situación de los avales concedidos por la Comunidad Autónoma, Organismos autónomos, Empresas públicas y demás entes que conforman el sector público regional, según prescribe el art. 99.2 de la Ley de Hacienda.

- En relación con la cuenta de la Administración General, no se ha rendido la siguiente documentación que determina el art. 100 de la Ley de Hacienda:

1. La Cuenta General de la deuda pública y, en general, del endeudamiento de la Comunidad Autónoma.

2. Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a los ejercicios futuros, al amparo de la autorización contenida en el art. 35 de la citada Ley, con indicación de los ejercicios a cuyos créditos hayan de imputarse.

3. La Cuenta General de Tesorería que ponga de relieve la situación de tesorería y las operaciones realizadas por aquélla durante el ejercicio.

Asimismo se incumple el art. 101 de la Ley de Hacienda al no incluir una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, ni la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

- El Organismo autónomo comercial "Imprenta Regional" no ha presentado la totalidad de las cuentas exigidas en su reglamentación (Decreto 51/1986, de 23 de mayo, arts. 63 a 65).

- Las empresas públicas han rendido las cuentas a este Tribunal con retraso, el 16 de octubre de 1992. No se han rendido las correspondiente a AGROVIAL, S.A.

Las empresas públicas, salvo el INFO y el grupo Radio Televisión Murciana, no han presentado el PAIF, ni los presupuestos de explotación y capital.

La sociedad UNDEMUR, S.G.R. ha incumplido el art. 99.2 de la Ley de Hacienda de la comunidad sobre presentación del estado de avales concedidos por el sector público regional.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

En el sistema presupuestario de la Comunidad, los programas no contienen, de una forma concreta y precisa, la determinación de los objetivos o fines a cumplir, ni los indicadores que permitan mediar el grado de cumplimiento de los objetivos, lo que impide el análisis de los grados de eficiencia y economía.

No existe un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestaria al no estar implantado el Plan General de Contabilidad Pública.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito.

En las modificaciones presupuestarias, que han supuesto un aumento de los créditos inicialmente aprobados de 13.978 millones de pesetas, se observa lo siguiente:

- Existe una falta de cobertura, en la financiación de dichas modificaciones, de 6.210 millones de pesetas.

- En la documentación facilitada de determinados expedientes de ampliación de transferencias y generaciones de crédito no figura la preceptiva expresión de su incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gastos y las razones que justifican las propuestas de modificación.

Las sucesivas leyes anuales de Presupuestos de la Comunidad renuevan la vigencia temporal de las autorizaciones de endeudamiento a medio y largo plazo, con destino a la financiación de gastos de inversión. Estas renovaciones se efectúan sin cifrar su importe, y en consecuencia sin dotación en el presupuesto de ingresos. Tampoco se condiciona tal renovación a la financiación de créditos susceptibles de incorporación.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

Existen algunos programas de gasto con bajo grado de ejecución, destacando en este sentido el programa 612 A "Economía y Planificación", con un remanente de 1.519 millones de pesetas, que representa el 95% del crédito final, de los que 1.500 millones corresponden a la totalidad del crédito inicial del concepto "Subvención a empresas privadas, reindustrialización".

En las subvenciones gestionadas por la comunidad, se incumple lo establecido en el art. 153 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, al observarse la falta de remisión a los Departamentos ministeriales correspondientes del estado comprensivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados al cierre del ejercicio.

Las obligaciones reconocidas del Cap. 9 "Variación de pasivos financieros" deben incrementarse en 6.100 millones de pesetas por la amortización de un préstamo en 1990.

Los derechos reconocidos en el Cap. 9 de la liquidación del presupuesto de ingresos de la Comunidad deberían reducirse en 4.600 millones de pesetas, importe resultante de las siguientes rectificaciones:

- Minoración de 14.929 millones de pesetas, al no corresponderse con operaciones de crédito efectivamente dispuestas o, incluso, por no haberse formalizado en el ejercicio.

- Aumento de 10.329 millones de pesetas correspondientes al importe suscrito y dispuesto en 1990 de un préstamo financiero en divisas, así como a las disposiciones parciales de préstamos concertados en el Banco de Crédito Local en ejercicios anteriores.

En relación con la contratación administrativa se indica:

- En cinco expedientes, correspondientes a la construcción de fases parciales de diversas obras, no consta la autorización administrativa que fundamente la conveniencia del fraccionamiento de las mismas, debidamente motivada, contraviniéndose lo preceptuado en los arts. 21, párrafo 2º, de la L.C.E. y 59, párrafos 1º y 2º, de su Reglamento.

- El 85% del importe total de los contratos de obras fiscalizados se ha adjudicado mediante concurso, sin que se haya acreditado la existencia de circunstancias concretas que, al amparo de la normativa vigente, pudieran justificar tal procedimiento, otorgándose a los órganos de contratación amplios márgenes de discrecionalidad mediante la fijación, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, de criterios exclusivamente genéricos sin prelación alguna.

- En 5 obras, adjudicadas por un importe total de 8.709 millones de pesetas, se atribuyó a los propios contratistas la redacción de los proyectos y sus respectivos presupuestos, la ejecución de las obras y la gestión de las correspondientes expropiaciones; sin que se haya justificado la imposibilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma para elaborar, por sus propios medios, los referidos proyectos y presupuestos. La atribución de facultades a los adjudicatarios para la gestión de expropiaciones se realizó al margen de la normativa vigente.

En conclusión, la atribución a los contratistas de las gestiones expropiatorias, en los contratos fiscalizados, constituye una irregularidad carente de fundamentación jurídica y, debe considerarse como una práctica perjudicial y arriesgada para los intereses públicos por cuanto atribuye a un particular actuaciones decisivas en la determinación o fijación de las indemnizaciones y demás costes que las expropiaciones pidieran originar.

Los importes de 3 contratos modificados fueron superiores al 20% de los respectivos precios de las obras principales, destacándose, especialmente, el relativo al "Modificado del de reparación del firme en la carretera MU-412", que representó el 183% del precio de la obra principal. Dicho modificado se adjudicó 11 meses después de haber expirado el plazo de ejecución de la obra principal directamente al mismo adjudicatario de aquélla sin promoción previa de concurrencia o consulta.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

En las operaciones de presupuestos cerrados, se mantienen pendientes de depurar saldos de deudores y de acreedores anteriores a 1983, que figuran pendientes de cobro o de pago y que proceden de la extinta Diputación Provincial. Asimismo, se produce esta situación respecto de los ejercicios 1983 a 1987.

En relación con la recaudación ejecutiva (tributos cedidos), existe un elevado número de certificaciones de descubierto pendientes de cobro, no habiéndose realizado la depuración de los saldos pendientes. Se mantiene en vigor un contrato anómalo de asistencia para la gestión recaudatoria.

2.1.4.- Operaciones extrapresupuestarias

La comunidad carece de las relaciones nominales de deudores y de acreedores que establece la Instrucción sobre contabilidad de operaciones extrapresupuestarias (Orden de la Consejería de Hacienda, de 3 de octubre de 1989), lo que no permite analizar la composición y antigüedad de los saldos.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

Determinadas cuentas como las de pagos a justificar y restringidas de recaudación, con un saldo al cierre del ejercicio de 845 millones de pesetas, deben ser objeto de inclusión en la tesorería de la Comunidad.

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps. 1 a 7) derivado de la liquidación presupuestaria determina un déficit de 15.743 millones de pesetas.

No obstante dicho déficit debe disminuirse en 539 millones de pesetas según el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
. Transferencias de Organismos autónomos	—	338	338
. Participación en los Ingresos de Estado	(201)	201	—
Total operaciones no financieras	(201)	539	338
OPERACIONES FINANCIERAS			
. Préstamos no dispuestos en el ejercicio	—	(14.929)	(14.929)
. Préstamos dispuesto contabilizados en presupuestos cerrados	(10.329)	10.329	—
. Transferencias de Organismos autónomos	—	(338)	(338)
. Amortizaciones de préstamos registrados en presupuestos cerrados	6.100	(6.100)	—
. Préstamos no dispuestos contabilizados en presupuestos cerrados	(528)	—	(528)
Total operaciones financieras	(4.757)	(11.038)	(15.795)
TOTAL	(4.958)	(10.499)	(15.457)

Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 15.204 millones de pesetas.

El remanente de tesorería al final del ejercicio, según las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 5.607 millones de pesetas. Dicho remanente debe disminuirse en 15.457 millones, según se indica en el cuadro anterior, presentando un saldo negativo al 31 de diciembre de 1990 por 9.850 millones de pesetas.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

En el presupuesto de ingresos de los Organismos "Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (I.S.S.O.R.M.)", "Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza (A.R.M.A.N.)" e "Imprenta Regional" no se ha reflejado la financiación de parte de los expedientes de ampliaciones de crédito por 77 millones de pesetas.

4.- EMPRESAS PUBLICAS

El Instituto de fomento de la Región de Murcia registra las transferencias de capital incorrectamente en cuentas de Patrimonio ya que, de acuerdo con los principios contables, deben registrarse como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" e imputarse a resultados en la proporción a la depreciación experimentada por los activos financiados con las subvenciones.

El beneficio obtenido asciende a 59 millones de pesetas; no obstante, si se excluyen las subvenciones de explotación recibidas de la Administración General, el Instituto presentaría unas pérdidas de 201 millones.

VALENCIANA

1.- OBSERVACIONES GENERALES

La cuenta de la Administración de la Generalidad se ha rendido dentro del plazo establecido en el art. 66 de la Ley 4/1984 de 13 de junio, de Hacienda Pública.

El sistema contable en vigor durante el ejercicio 1990 está adaptado al Plan General de Contabilidad Pública, salvo en lo que se refiere a la Administración Institucional, conforme a lo dispuesto por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 30 de diciembre de 1986. No obstante, no puede considerarse completa su implantación, presentándose en la Cuenta General un balance, denominado "de saldos" y un cuadro de financiación anual, omitiéndose las cuentas de resultados, que figurán en el balance acumulados con los de ejercicios anteriores en la rúbrica de "resultados pendientes de aplicación".

La inexistencia de un sistema de indicadores que permita evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, así como de una contabilidad analítica que determine el coste de los servicios, impide la adecuada evaluación de la eficacia y economía en el uso de los recursos.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

En virtud de la Resolución del Consejero de Economía y Hacienda de 3 de julio de 1990 se ha efectuado una anulación de los créditos incorporados que ascendió a 17.288 millones de pesetas, seguida de una "redistribución" de los créditos. Como consecuencia del citado procedimiento se han realizado transferencias desde operaciones de capital y financieras hacia operaciones corrientes por importe de al menos 9.469 millones de pesetas.

Se ha detectado la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a ejercicios anteriores a 1989, lo que contraviene el art. 30.3 de la Ley de la Hacienda Pública.

Se han producido modificaciones sobre el crédito extraordinario concedido por Ley 3/1990, que han disminuido su importe en 458 millones de pesetas.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto de gastos

Los presupuestos para 1990 fueron aprobados por las Cortes Valencianas el 31 de mayo de 1990, lo que dio lugar a la prórroga de los del ejercicio precedente.

En materia de gestión de los del cap. 1, se han detectado diversas carencias de los expedientes de personal, en relación con el título de funcionario, hoja de servicios, documentación relativa al nombramiento y toma de posesión, así como justificativa de las retribuciones percibidas en el ejercicio. Por otra parte, se han observado diferencias entre los datos contenidos en el fichero informatizado de personal y los figurados en el expediente.

No existe un registro de personal docente y se han observado diversas anomalías en relación con el cálculo de las retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas de este grupo.

En lo que se refiere a la contratación administrativa, se ha puesto de manifiesto falta de publicidad de la licitación o insuficiencia de la misma, insuficiente acreditación en el expediente de la personalidad del adjudicatario, así como de que éste se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social e incumplimiento por los adjudicatarios de su obligación de reintegrar el importe de los anuncios de la licitación.

En relación con las subvenciones concedidas se observa el incumplimiento de las normas establecidas en el art. 28 de la Ley de presupuestos, la no inclusión en el expediente del oportuno informe fiscal, la aceptación de justificantes que no cumplen requisitos formales mínimos, así como diversos incumplimientos de la normativa reguladora, bien por parte del beneficiario, bien por parte de la propia Administración, sin que se hayan adoptado medidas tendentes a la anulación y reintegro de las ayudas.

Los importes que en concepto de amortizaciones recoge la Cuenta de la deuda pública no coinciden con los registrados en contabilidad.

2.1.3.- Ejecución del presupuesto de ingresos

Se incluyen indebidamente en el presupuesto de ingresos y gastos las transferencias al Servicio Valenciano de Salud procedentes del Estado. Estos ingresos ajenos ascienden a 210.992 millones de pesetas.

Igualmente se incluyen indebidamente en los presupuestos de la Administración General los ingresos y gastos por las transferencias del Estado destinadas a las Corporaciones Locales procedentes del Fondo Nacional de Cooperación Municipal. Aquéllos ascienden a 81.848 millones de pesetas.

En el cap. 9 se han reconocido indebidamente derechos por importe de 26.069 millones, 24.576 millones correspondientes a empréstitos no emitidos y el resto a la diferencia entre el precio de emisión y el nominal en subastas de pagarés.

Por otra parte, se ha producido en el ejercicio la formalización y disposición de 5.000 millones correspondientes a un préstamo con el Banco de Crédito Local, indebidamente reconocidos como derechos en el ejercicio anterior.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

Los deudores presupuestarios carecen de la documentación justificativa suficiente, por lo que la razonabilidad de los importes contabilizados queda sujeta a incertidumbre.

La carencia de un inventario valorado impide asegurar la razonabilidad de los importes del inmovilizado material.

En lo que se refiere a las operaciones extrapresupuestarias, se detectan irregularidades en cuanto al empleo de cuentas de naturaleza acreedora para efectuar pagos de los que se deriva el nacimiento de deudores, lo que es contrario a su naturaleza.

En materia de pagos a justificar, se ha observado un elevado incumplimiento de los plazos de justificación.

Las cuentas rendidas no reflejan la totalidad de los compromisos de gasto plurianual, limitándose a los tres siguientes ejercicios. Se producen inconsistencias entre la información contable de un ejercicio y la del siguiente, así como incumplimientos del art. 29.2 de la Ley de Hacienda Pública.

Los estados financieros no presentan adecuadamente el riesgo por los avales concedidos. Deberían anularse los avales contabilizados sin formalización de la correspondiente operación crediticia.

2.2.2.- Resultados

El resultado por operaciones no financieras del presupuesto corriente alcanzan un déficit de 42.991 millones de pesetas, que, unido al déficit por operaciones de ejercicios anteriores, de 4.992 millones, supone un déficit total no financiero de 47.983 millones. Este déficit debe disminuirse en 5.448 millones, como resultado de los ajustes 1 a 3 que figuran a continuación:

(En millones de pesetas)

Concepto	Resultados ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Total
1. Derechos liquidados por el Estado en 1990 correspondientes al I.E. s/Patrimonio, indebidamente reconocidos en 1989	(4.794)	4.794	—
2. Anulaciones producidas en 1990 que debieran haberse efectuado en 1989	(756)	756	—
3. Derechos prescritos	—	(102)	(102)
4. Derechos reconocidos indebidamente en 1989 por empréstitos y préstamos	(13.332)	5.000	(8.332)
5. Diferencia entre nominal y el precio de emisión de subastas de pagarés	—	(1.493)	(1.493)
6. Empréstitos no emitidos	—	(24.576)	(24.576)
TOTAL	(18.882)	(15.621)	(34.503)

El remanente de tesorería según datos contables asciende a 124.981 millones de pesetas, debiendo minorarse, como consecuencia de los ajustes anteriores en 34.503 millones.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El subsector está integrado por seis entidades, cinco de carácter administrativo y una de carácter comercial.

3.1.- GERENCIA DE PUERTOS.

No ha elaborado el balance de situación y la cuenta de resultados, al no disponer de información patrimonial suficiente.

La Gerencia elabora su presupuesto a nivel de capítulos presupuestarios, no existiendo desglose por conceptos.

En materia de modificaciones presupuestarias, se observa la ausencia de la preceptiva aprobación por la Consejería de Economía y Hacienda de las incorporaciones de remanentes de crédito.

Se han detectado deficiencias en la gestión de los ingresos por prestación de servicios, concesiones, autorizaciones y financieros.

3.2.- SERVICIO VALENCIANO DE SALUD

No han sido rendidas las cuentas de resultados ni el balance de situación. La liquidación presupuestaria tampoco se ha presentado completa, no figurando, en particular, ninguna información acerca e la evolución de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de ejercicios cerrados, entre otras deficiencias.

Se han observado deficiencias de la documentación contenida en los expedientes de personal. Deben proseguirse los trabajos encaminados a la efectiva implantación de un Registro de Personal.

Los procedimientos y control interno relativos a aprovisionamiento y almacenes deben ser objeto de homogeneización entre los distintos centros.

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

El subsector está constituido por quince entidades, nueve sociedades anónimas y seis Entes públicos.

El importe agregado del activo asciende a 40.315 millones de pesetas, destacando el Ente Público "Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana", con 17.958 millones de pesetas, así como el grupo dependiente del Ente público de Radiotelevisión Valenciana, con 2.273 millones de pesetas.

Se han registrado unas pérdidas agregadas de 603 millones de pesetas, después de la aplicación de subvenciones de explotación y capital, por importe de 10.547 millones de pesetas y 885 millones de pesetas, respectivamente.

En general, se observa una deficiente formulación de los PAIF, diversas anomalías en los sistemas de control y registro del inmovilizado y sus amortizaciones, así como la aplicación de procedimientos de contratación que no garantizan suficiente publicidad y concurrencia.

En particular, se han detectado las siguientes deficiencias e irregularidades:

- En la Empresa "Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.", no se ha contabilizado la ampliación de capital acordada en el ejercicio, de 40 millones de pesetas. No ha practicado las correcciones valorativas derivadas de su participación en la Empresa pública "Valenciana de Residuos, S.A.", ni ha dotado las provisiones oportunas por insolvencias.

- "Valenciana de Residuos, S.A." no registra los trabajos realizados hasta el momento de su certificación definitiva, por lo que no figuran reflejados en las Cuentas Anuales los pendientes de facturación en fin de ejercicio. La Empresa no ha preparado el Informe de gestión que debe acompañar las Cuentas Anuales. Ha rendido cuentas con posterioridad al plazo legalmente establecido.

- El "Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A." ha formulado sus Cuentas Anuales con posterioridad a los plazos legalmente establecidos.

- El "Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalidad Valenciana", Ente público desde 1 de enero de 1989, no ha formulado las Cuentas Anuales conforme a la normativa aplicable por disponer de un sistema de información contable básicamente presupuestario, ni ha presentado las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990.

- "Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana" no dispone de un inventario suficientemente detallado y valorado del inmovilizado material adscrito por la Administración General, previa transferencia de la Administración del Estado. No dispone de un estudio actuarial que permita evaluar las posibles contingencias derivadas del pago de pensiones por jubilación anticipada de sus trabajadores. No adjunta a las Cuentas Anuales el Informe de Gestión.

- El "Instituto Valenciano de Arte Moderno" no ha elaborado balance ni cuentas de resultados, por disponer de un sistema de información exclusivamente presupuestario.

- El "Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música" no adjunta el Informe de Gestión a las Cuentas Anuales.

II. CORPORACIONES LOCALES

INDICE

II.1. INTRODUCCION.

- II.1.1. Ambito territorial del análisis
- II.1.2. Objeto del análisis
- II.1.3. Grado de cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas anuales.
- II.1.4. Estudio de algunas magnitudes presupuestarias de las Corporaciones Locales.
- II.1.5. Otras consideraciones sobre las cuentas rendidas por las Corporaciones Locales

II.2. RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES, PRESENTADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS

- II.2.1 Consideraciones preliminares
- II.2.2. Resultados obtenidos, expuestos por Comunidades Autónomas:
  - C.A. ANDALUCÍA
  - C.A. ARAGÓN
  - C.A. ASTURIAS
  - C.A. BALEARES
  - C.A. CANARIAS
  - C.A. CANTABRIA
  - C.A. CASTILLA-LA MANCHA
  - C.A. CASTILLA-LEÓN
  - C.A. CATALUÑA

- C.A. EXTREMADURA
- C.A. GALICIA
- C.A. MADRID
- C.A. MURCIA
- C.A. NAVARRA
- C.A. LA RIOJA
- C.A. VALENCIA
- C.A. PAÍS VASCO
- AYUNTAMIENTO DE CEUTA
- AYUNTAMIENTO DE MELILLA

II.3. CONTRATACION ADMINISTRATIVA.
II.3.1. Ambito y objetivos.
II.3.2. Resultados del examen de los expedientes contractuales.208

II.- CORPORACIONES LOCALES

II.1.- INTRODUCCION.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo trece, uno, de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se exponen en este capítulo los resultados más significativos que se han deducido del análisis de las cuentas anuales rendidas por las Entidades integrantes del Subsector Público de las Corporaciones Locales (definidas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y a las que se refiere el artículo 4º, 1.c) de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas), así como de la fiscalización de expedientes contractuales formalizados durante el ejercicio de 1990.

II.1.1.- ÁMBITO TERRITORIAL DEL ANÁLISIS.

El ámbito territorial en el que se localizan las Entidades, cuyas cuentas son objeto de análisis, es el integrado por las siguientes Corporaciones:

a) Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.
b) Ayuntamientos.

Todas ellas están sometidas, en su organización y funcionamiento, a la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril, y a las restantes disposiciones legales que la desarrollan.

En el cuadro número 1, se presenta la totalidad de las Entidades que integran el ámbito mencionado, clasificadas por Comunidades Autónomas. En el conjunto nacional las Corporaciones de referencia alcanzan la cifra de 8.124, de las que 48 son Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares (38 Diputaciones Provinciales, 3 Consejos Insulares de Baleares y 7 Cabildos Insulares de Canarias), 1.100 son Ayuntamientos de población superior a los 5.000 habitantes y 6.976 son Ayuntamientos de población igual o inferior a los 5.000 habitantes.

CUADRO Nº 1

COMUNIDADES AUTONOMAS	Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares	Municipios mayores de 5.000 hab.	Municipios menores de 5.000 hab.	TOTALES
ANDALUCIA (1)	8	234	532	774
ARAGON	3	20	709	732
ASTURIAS	-	34	44	78
BALEARES	3	28	39	70
CANARIAS	7	59	28	94
CANTABRIA	-	16	86	102
CASTILLA-LA MANCHA	5	62	853	920
CASTILLA Y LEON	9	49	2.199	2.257
CATALUÑA (2)	4	135	807	946
EXTREMADURA	2	43	337	382
GALICIA (1)	4	133	180	317
MADRID	-	38	140	178
MURCIA	-	35	10	45
NAVARRA	-	14	252	266
LA RIOJA	-	7	167	174
C. VALENCIANA (2)	3	129	410	542
PAIS VASCO (2)	-	62	183	245
CEUTA	-	1	-	1
MELILLA	-	1	-	1
SUMAS	48	1.100	6.976	8.124

(1) La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Consello de Contas de Galicia han clasificado los Ayuntamientos mayores y menores de 5.000 habitantes con ligera diferencia respecto a la rectificación del censo de población de 1990 del INE.

(2) La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, la Sindicatura de Cuentas de Valencia y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas presentan ciertas diferencias en relación al número de municipios que ofrece la rectificación del Censo de población de 1990 del INE. Las diferencias señaladas son de 3 municipios en cada una de las Comunidades de Valencia y Cataluña y de 1 en el País Vasco.

El conjunto de los municipios que figuran en el cuadro citado ha sido clasificado, en general, en función de su número de habitantes, de conformidad con la rectificación del censo de población, referida a 1 de enero de 1990 y realizada, como es preceptivo, por el Instituto Nacional de Estadística. Las diferencias existentes entre los datos registrados en el cuadro para algunas Comunidades Autónomas y en el censo rectificado, figuran al pie de aquél y son poco relevantes.

II.1.2.- OBJETO DEL ANÁLISIS.

El objeto del estudio del presente capítulo lo constituyen las materias siguientes:

a) Los resultados deducidos del examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales, que lo han hecho en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y

b) Los resultados deducidos del examen de expedientes contractuales formalizados durante el ejercicio de 1990.

Las cuentas anuales examinadas son las de rendición obligatoria, a las que hace referencia el artículo 459 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y que se relacionan a continuación:

a) Cuenta General del Presupuesto.
b) Cuenta de la Administración del Patrimonio.
c) Cuenta de Tesorería.
d) Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).

Los expedientes contractuales examinados han sido seleccionados entre los que cumplen las condiciones requeridas en el artículo 39.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal para ser considerados como objeto de fiscalización en particular.

Las Corporaciones Locales pertenecientes a las Comunidades Autónomas que tienen legalmente constituído Organo de Control Externo han rendido sus correspondientes cuentas anuales ante los mismos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal, los Organos de Control Externo mencionados han remitido los resultados individualizados del examen y comprobación de las cuentas de las Corporaciones Locales integrantes de su correspondiente Sector Público Autonómico, los cuales han sido examinados y estudiados por este Tribunal. Los resultados figuran en el apartado II.2. del presente capítulo, clasificados por Comunidades Autónomas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley de Funcionamiento, el Tribunal de Cuentas ha desarrollado una actuación específica de coordinación de su actividad, en materia de examen y comprobación de cuentas, con la de los Organos de Control Externo mencionados, al objeto de establecer técnicas y criterios de fiscalización comunes, con el fin de lograr una mayor eficacia en su función y de evitar duplicidad en el ejercicio de las actuaciones fiscalizadoras.

Las Comunidades Autónomas que cuentan con Organo de Control Externo son las de: Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, Valencia y País Vasco.

Las Corporaciones pertenecientes a las diez Comunidades Autónomas restantes, que no tienen Organo de Control Externo propio, han rendido directamente sus cuentas anuales al Tribunal, que ha procedido a realizar la preceptiva actuación fiscalizadora de examen y comprobación de las mismas y cuyos resultados se presentan en los apartados siguientes de este capítulo. Se unen a los mismos los correspondientes a las cuentas rendidas por los municipios de Ceuta y Melilla, debido a sus características geográficas particulares.

II.1.3.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

Las Corporaciones Locales con población superior a los 5.000 habitantes, clasificadas por Comunidades Autónomas, que no han rendido sus cuentas anuales en el plazo establecido legalmente o lo han efectuado con importantes omisiones y deficiencias, no obstante haber sido requeridas para su cumplimiento, han sido las que se relacionan a continuación. Las Corporaciones de población igual o inferior a 5.000 habitantes, que han incumplido esta obligación, figuran con indicación numérica, si bien en el anexo II.1 se relacionan con carácter nominal.

1. ANDALUCIA :

Mayores de 5.000 habitantes (18,5%):

1.	Carboneras	Almería
2.	Alcalá del Valle	Cádiz
3.	Arcos de la Frontera[1]	Cádiz
4.	Conil de la Frontera	Cádiz
5.	Jerez de la Frontera	Cádiz
6.	Olvera	Cádiz
7.	San Fernando	Cádiz
8.	San Roque	Cádiz
9.	Doña Mencía	Córdoba
10.	Posadas	Córdoba

[1] Rinden sus cuentas con anterioridad al 30 de septiembre de 1993.

11.	Atarfe	Granada
12.	Huescar	Granada
13.	Illora	Granada
14.	Moclin	Granada
15.	Pinos-Puente	Granada
16.	Salobreña	Granada
17.	Aljaraque	Huelva
18.	Isla Cristina	Huelva
19.	Lepe	Huelva
20.	Moguer	Huelva
21.	Valverde del Camino	Huelva
22.	Andújar	Jaén
23.	Arjona	Jaén
24.	Carolina (La)	Jaén
25.	Castillo de Locubin[1]	Jaén
26.	Vilches	Jaén
27	Villan del Arzobispo	Jaén
28.	Fuengirola[1]	Málaga
29.	Nerja	Málaga
30.	Ronda	Málaga
31.	Vélez Málaga	Málaga
32.	Algaba (La)	Sevilla
33.	Aznalcollar	Sevilla
34.	Camas[1]	Sevilla
35.	Cazalla de la Sierra	Sevilla
36.	Fuente de Andalucía	Sevilla
37.	Gines	Sevilla
38.	Lora del Río	Sevilla
39.	Moron de la Frontera	Sevilla
40.	Osuna[1]	Sevilla
41.	Puebla del Río (La)	Sevilla
42.	Sanlucar la Mayor	Sevilla
43.	Tomares	Sevilla
44.	Villaverde del Río	Sevilla
45.	Viso del Alcor (El)[1]	Sevilla

Menores de 5.000 habitantes (37,9%): [2]

202 Corporaciones.

2. ARAGON:

Mayores de 5.000 habitantes (13%):

1.	Caspe[3]	Zaragoza
2.	Tarazona	Zaragoza
3.	Tauste	Zaragoza

Menores de 5.000 habitantes (40%):

284 Corporaciones.

3. ASTURIAS:

Mayores de 5.000 habitantes (17,6%):

1.	Cangas de Onís	Oviedo
2.	Castrillón	Oviedo
3.	Valdés	Oviedo
4.	Llanes	Oviedo
5.	Piloña	Oviedo
6.	Colunga	Oviedo

Menores de 5.000 habitantes (22,7%):

10 Corporaciones.

4. BALEARES:

Mayores de 5.000 habitantes (6,5%):

1. Pollença
2. Lluchmayor.

Menores de 5.000 habitantes (23,1%):

9 Corporaciones.

5. CANARIAS:

Mayores de 5.000 habitantes (3%):

1.	Firgas	Las Palmas
2.	Guía de Isora	Tenerife.

Menores de 5.000 habitantes (7,1%):

2 Corporaciones

6. CANTABRIA:

Mayores de 5.000 habitantes (12,5%):

1.	Astillero	Santander
2.	Castro-Urdiales	Santander

Menores de 5.000 habitantes (14%):

12 Corporaciones.

7. CASTILLA-LA MANCHA:

Mayores de 5.000 habitantes (20,9%):

1.	Tarazona de la Mancha	Albacete
2.	Yeste	Albacete
3.	Almadén	Ciudad Real
4.	Argamasilla de Alba	Ciudad Real
5.	Bolaños de Calatrava	Ciudad Real
6.	Mota del Cuervo	Cuenca
7.	Las Pedroñeras	Cuenca
8.	Quintanar del Rey	Cuenca
9.	Tarancón	Cuenca
10.	Sigüenza	Guadalajara
11.	Bargas	Toledo
12.	Consuegra	Toledo
13.	Fuensalida	Toledo
14.	Villafranca de los Caballeros	Toledo

Menores de 5.000 habitantes (28,6%):

244 Corporaciones

8. CASTILLA Y LEON:

Mayores de 5.000 habitantes (10,3%):

1.	Cistierna	León
2.	Fabero	León
3.	Pola de Gordon (La)	León
4.	San Andrés de Rabanedo	León
5.	Villablino	León
6.	Arenas de San Pedro	Avila

Menores de 5.000 habitantes (29,5%):

648 Corporaciones.

9. CATALUÑA:

Mayores de 5.000 habitantes (6,5%):

1.	Sant Vicenç dels Horts[4]	Barcelona
2.	Torelló[4]	Barcelona
3.	Montgat[4]	Barcelona
4.	Roca del Vallés (La)[4]	Barcelona
5.	Suria[4]	Barcelona
6.	Figueres[4]	Gerona
7.	Roses[4]	Gerona
8.	Balaguer[4]	Lérida
9.	Seu d'Urgell (La)[4]	Lérida

Menores de 5.000 habitantes (39,7%):

320 Corporaciones.

10. EXTREMADURA:

Mayores de 5.000 habitantes (11,1%) :

1.	Guareña	Badajoz
2.	Oliva de la Frontera	Badajoz
3.	Santos de Maimona	Badajoz
4.	Jaraiz de la Vera	Cáceres
5.	Plasencia	Cáceres

Menores de 5.000 habitantes (22,8%) :

77 Corporaciones.

11. GALICIA:

Mayores de 5.000 habitantes (5,8%):

1.	Cariño	La Coruña
2.	Carral	La Coruña
3.	Muxía[5]	La Coruña
4.	Outes	La Coruña
5.	Taboada[5]	Lugo
6.	Meis	Pontevedra
7.	Nigrán[5]	Pontevedra
8.	Sanxenxo	Pontevedra

Menores de 5.000 habitantes (9,4%):

17 Corporaciones.

---

[2] La relación nominal de todas las Corporaciones Locales menores de 5.000 habitantes que no han rendido cuentas figura en el anexo II.2.

[3] Rinden sus cuentas con anterioridad al 30 de septiembre de 1993.

[4] Rinden sus cuentas con anterioridad al 30 de septiembre de 1993.

[5] Rinden sus cuentas con anterioridad al 30 de septiembre de 1993.

12. MADRID:

Mayores de 5.000 habitantes (7,9%):

1. Boadilla del Monte	Madrid
2. Colmenar de Oreja	Madrid
3. Humanes de Madrid	Madrid

Menores de 5.000 habitantes (30%):

42 Corporaciones

13. MURCIA:

Mayores de 5.000 habitantes (8,6%):

1. Alhama	Murcia
2. Lorquí	Murcia
3. San Javier	Murcia

Menores de 5.000 habitantes (10%):

1 Corporación

14. NAVARRA:

Mayores de 5.000 habitantes (7,1%):

1. San Adrián[6]	Pamplona

Menores de 5.000 habitantes (14,7%):

37 Corporaciones

15. LA RIOJA:

Mayores de 5.000 habitantes (28,6%):

1. Haro	Logroño
2. Nájera	Logroño

Menores de 5.000 habitantes (40,1%):

67 Corporaciones.

16. VALENCIA:

Mayores de 5.000 habitantes (1,5%):

1. Albatera	Alicante
2. Bañeres	Alicante

Menores de 5.000 habitantes (14,6%):

60 Corporaciones.

17. PAIS VASCO:

Menores de 5.000 habitantes (0,5%):

1 Corporación.

Con carácter general, el grado de cumplimiento de la obligación establecida ha sido, en valor medio, del 72,85 %; para las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, del 100 por cien; para los Ayuntamientos de población superior a los 5.000 habitantes, del 89 % y para los de igual o menor de 5.000 habitantes, del 70 %.

[6] Rinden sus cuentas con anterioridad al 30 de septiembre de 1993.

II.1.4.- ESTUDIO DE ALGUNAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

En el cuadro número 2 se han registrado los valores acumulados, deducidos de las liquidaciones anuales de los presupuestos refundidos de las Corporaciones Locales que rindieron cuentas, las cuales han sido clasificadas en atención a la Comunidad Autónoma en la que están radicadas.

Las cifras del citado cuadro tienen como finalidad ofrecer una primera aproximación, global y cuantificada, referida a todo el ámbito territorial español, de la entidad presupuestaria que alcanza el Subsector Público de Régimen Local.

Los valores consignados a continuación representan exclusivamente un orden de magnitud de las variables presupuestarias de las Corporaciones Locales, pero para una adecuada delimitación de aquéllos han de tenerse en consideración las siguientes circunstancias: a) Son los resultados agregados que se han deducido de las liquidaciones presupuestarias rendidas por las citadas entidades; b) No han sido objeto de consolidación contable, y c) No han sido objeto de ajustes como resultado de la fiscalización.

En relación con los ingresos presupuestarios, las previsiones iniciales alcanzaron los 4,04 billones de pesetas; las modificaciones presupuestarias se elevaron a 600,09 miles de millones de pesetas y finalmente las previsiones definitivas registraron los 4,63 billones de pesetas.

En cuanto a los gastos presupuestarios, las previsiones iniciales fueron de 3,82 billones de pesetas; las modificaciones presupuestarias se elevaron a 805,53 miles de millones de pesetas y, finalmente, las previsiones definitivas registraron los 4,63 billones de pesetas.

Las modificaciones presupuestarias en las Corporaciones Locales representaron el 21% de los créditos iniciales de gastos.

Las modificaciones de crédito de mayor entidad porcentual, en relación con los presupuestos iniciales, fueron las correspondientes a las Corporaciones de las Comunidades de Madrid (41%), Cataluña (35%) y Castilla-La Mancha (22%).

La menor modificación de crédito, en porcentaje, correspondió a las Corporaciones de la Comunidad Autónoma de Asturias (11%).

El grado de ejecución del presupuesto de ingresos fue del 95%, con 4,43 billones de pesetas liquidados. El grado de ejecución del presupuesto de gastos fue del 89 %, con 4,15 billones de pesetas reconocidas.

El grado más elevado de ejecución de los presupuestos de ingresos de las Corporaciones fue el del País Vasco (100%), y Asturias (100%). El menor grado correspondió a Cantabria (91%).

El grado más elevado de ejecución de los presupuestos de gastos fue el de Cataluña (93%), seguido de Murcia (92%). El menor grado correspondió a Aragón (77%).

Se recaudó el 69,47 % de los derechos liquidados, por importe de 3,08 billones de pesetas y se pagaron obligaciones por importe de 2,82 billones de pesetas, que constituyen el 67,94 % de las reconocidas.

El mayor grado de pago de las obligaciones se registró en la Comunidad de Navarra (88%) y el menor se registró en la de Andalucía (59%).

CUADRO Nº 2

VARIABLES PRESUPUESTARIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES (CONJUNTO NACIONAL)

A) PRESUPUESTO DE INGRESOS. (cifras en millones de pesetas)

COMUNIDADES AUTONOMAS	Previsiones Iniciales	Modificaciones de previsiones	Previsiones definitivas	Derechos liquidados	Derechos recaudados
ANDALUCIA	671.715	42.060	713.775	689.091	442.754
ARAGON	159.600	14.455	174.055	163.843	118.425
ASTURIAS	58.530	3.817	62.347	62.629	46.397
BALEARES	94.525	7.338	101.863	95.237	62.457
CANARIAS	270.668	21.210	291.878	269.562	165.309
CANTABRIA	38.363	2.569	40.932	37.256	29.451

COMUNIDADES AUTONOMAS	Previsiones Iniciales	Modificaciones de previsiones	Previsiones definitivas	Derechos liquidados	Derechos recaudados
CASTILLA-LA MANCHA	143.071	28.258	171.329	159.342	124.391
CASTILLA Y LEON	270.739	21.031	291.770	277.437	199.242
CATALUÑA	719.848	221.105	940.953	912.632	643.068
EXTREMADURA	89.467	9.881	99.348	93.274	67.045
GALICIA	248.154	6.460	254.614	246.365	171.036
LA RIOJA	23.125	1.776	24.901	24.453	15.660
MADRID	426.031	152.061	578.092	539.167	398.364
MURCIA	75.055	7.508	82.563	77.449	51.870
NAVARRA	34.128	-	34.128	32.353	28.227
VALENCIA	462.650	47.260	509.910	489.173	323.302
PAIS VASCO	231.393	12.332	243.725	245.407	180.103
CEUTA	12.219	303	12.522	13.564	8.089
MELILLA	7.218	661	7.879	7.890	6.411
TOTAL	4.036.499	600.085	4.636.584	4.436.124	3.081.601

VARIABLES PRESUPUESTARIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES (CONJUNTO NACIONAL)

B) **PRESUPUESTO DE GASTOS**. (cifras en millones de pesetas)

COMUNIDADES AUTONOMAS	Créditos Iniciales	Modificaciones de créditos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas	Obligaciones pagadas
ANDALUCIA	637.944	97.761	735.705	679.210	403.435
ARAGON	155.118	18.858	173.976	135.672	103.029
ASTURIAS	54.229	6.239	60.468	55.841	39.528
BALEARES	87.046	11.797	98.843	88.587	54.267
CANARIAS	247.514	34.638	282.152	254.177	156.125
CANTABRIA	35.272	4.883	40.155	34.070	25.736
CASTILLA-LA MANCHA	138.625	31.521	170.146	151.506	112.944
CASTILLA Y LEON	259.696	33.504	293.200	262.627	171.407
CATALUÑA	690.460	244.241	934.701	870.448	604.076
EXTREMADURA	89.774	11.817	101.591	90.614	60.419
GALICIA	218.900	29.904	248.804	222.157	147.128
LA RIOJA	23.004	2.835	25.839	21.066	13.748
MADRID	402.114	165.692	567.806	472.803	374.534
MURCIA	73.319	9.003	82.322	76.460	50.661
NAVARRA	34.362	-	34.362	31.310	27.556
VALENCIA	432.250	63.577	495.827	455.354	288.266
PAIS VASCO	224.888	38.047	262.935	231.376	176.092
CEUTA	12.112	545	12.657	13.304	7.752
MELILLA	7.207	671	7.878	7.650	5.572
TOTAL	3.823.834	805.533	4.629.367	4.154.232	2.822.275

II.1.5.- OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CUENTAS RENDIDAS POR LAS CORPORACIONES LOCALES

Como ya se ha indicado, las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia, que no tienen Organo de Control Externo, han rendido directamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, que ha procedido a efectuar el preceptivo examen y comprobación de las mismas. Los resultados deducidos de dicho examen figuran, especificados por Comunidades Autónomas, en unión, en su caso, de los obtenidos por los Organos de Control Externo, en el apartado 11.2. siguiente, el cual se dedica a la exposición y descripción de los mismos.

Se han examinado y comprobado todas las cuentas rendidas por las Corporaciones Locales de las die~ Comunidades Autónomas citadas que tienen una población superior o igual a los 5.000 habitantes. Y en aplicación del artículo 37 de la Ley de Funcionamiento, se ha examinado, mediante selección aleatoria, además, el 7,64 % de las cuentas rendidas por las Entidades con población inferior a los 5.000 habitantes.

Han sido objeto de investigación los cuatro estratos del universo estadístico de Corporaciones constituídos por las siguientes entidades y que, en adelante, serán reseñados e identificados con la letra mayúscula correspondiente a cada uno de ellos:

A) Estrato integrado por 19 Diputaciones Provinciales y 3 Consejos Insulares.

B) Estrato formado por 42 Ayuntamientos con población superior o igual a los 50.000 habitantes.

C) Estrato formado por 292 Ayuntamientos con población superior o igual a los 5.000 habitantes e inferior a los 50.000 habitantes.

D) Estrato formado por 350 Ayuntamientos con población inferior a los 5.000 habitantes.

El número total de Entidades que integran los cuatro estratos citados es de 706.

Las actuaciones de examen y comprobación de las cuentas anuales se han orientado a la realización de una revisión formal de las mismas, destinada, entre otras cuestiones, a comprobar las concordancias de enlace entre los saldos finales del ejercicio anterior y los iniciales del corriente de las mismas rúbricas; a examinar la coherencia interna entre las diferentes cuentas, en los casos en que ésta debe existir; a verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en lo referente a la formación, tramitación y aprobación de las citadas cuentas; a examinar la aplicación adecuada de los principios y relaciones contables establecidos normativamente; a observar el cumplimiento del principio de nivelación presupuestaria, etc. Las cuentas de rendición obligatoria son sometidas a 94 pruebas de examen diferentes, tanto de carácter formal como sustantivas.

A las entidades cuyas cuentas han sido examinadas se les han notificado las irregularidades o anomalías observadas, a fin de que pudiesen emitir sus alegaciones correspondientes durante el periodo de audiencia fijado. Se han recibido respuestas de 405 de las 548 Entidades notificadas (el 73,9 %) por presentar irregularidades o anomalías en sus cuentas, y cuando así ha procedido, en atención a las pruebas documentales aportadas, se han incorporado aquéllas a los resultados del examen y comprobación.

Durante el ejercicio de 1990, las cuentas rendidas por las Corporaciones Locales presentan un nivel de información, en relación con la definición de la naturaleza y estructura de las modificaciones anuales de los créditos presupuestarios, sensiblemente inferior al que se consideraba como deseable en la "exposición de motivos" de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, y que debería ser análogo al que se deduce de la aplicación de la Ley General Presupuestaria a otras Entidades Públicas.

La insuficiencia citada, que es temporal, se debe a que, en la Disposición Transitoria octava de la citada Ley Reguladora, se indica que la aplicación de las normas relativas al régimen presupuestario de las Corporaciones Locales ha de ser desarrollada por vía reglamentaria, previamente al nacimiento de su obligatoriedad. Y dicho desarrollo se concretó en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que en su Disposición Final segunda establece que se aplicará su contenido, en cuestiones presupuestarias y contables, con carácter obligatorio, a partir de uno de enero de 1992.

En consecuencia, en el presente ejercicio se ha mantenido el tratamiento de las modificaciones presupuestarias de las Corporaciones Locales con la especialidad que le es tradicional y que está regulada en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. A partir del ejercicio de 1992, las modificaciones presupuestarias de las Corporaciones Locales tendrán un tratamiento jurídico y una clasificación análogos a los de las restantes Entidades que integran el Sector Público

II.2.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES, PRESENTADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS.

II.2.1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

En este apartado se exponen los resultados deducidos del examen y comprobación de las cuentas anuales seleccionadas entre aquéllas que han sido rendidas por las Corporaciones Locales.

Las conclusiones de las pruebas efectuadas a cuentas de las distintas Corporaciones se presentan a continuación clasificadas por Comunidades Autónomas, en atención a la localización de aquéllas y, finalmente, también se incluyen en este apartado, como singularidad, los resultados del examen y comprobación de las cuentas anuales de los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla.

II.2.2.- RESULTADOS OBTENIDOS, EXPUESTOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

1.- ENTIDADES INTEGRANTES DEL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL DE ANDALUCÍA

Las entidades que conforman el subsector público local o dependen de él en la Comunidad Autónoma Andaluza al 31 de diciembre de 1.990, es el siguiente:

Diputaciones Provinciales	8
Organismos Autónomos dependientes	29
Empresas Públicas dependientes	10
Ayuntamientos	766
Organismos Autónomos dependientes	188
Empresas Públicas dependientes	67
Mancomunidades	52
Entidades locales Menores	34
Agrupaciones de Municipios	1
TOTAL	**1.155**

Fuente: Censo de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

Para este ejercicio presupuestario sólo fueron objeto de solicitud de información las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos.

2.- APROBACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE LOS PRESUPUESTOS

Del análisis de las fechas de aprobación y rendición de las cuentas de las Corporaciones Locales así como de sus presupuestos se han obtenido las siguientes conclusiones:

2.1.- APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Provincia	Total recibidos Nº	Aprobados en plazo Nº	Aprobados con posterioridad Nº	No consta aprobación Nº
Almería	72	1	69	2
Cádiz	24	0	18	6
Córdoba	61	1	49	11
Granada	122	1	104	17
Huelva	44	1	28	15
Jaén	69	0	57	12
Málaga	54	0	45	9
Sevilla	71	2	49	20
Total Aytos.	517	6	419	92
Diputaciones	8	1	7	

En la columna correspondiente a "No consta aprobación", se refiere a aquellas Corporaciones de cuya documentación no se puede deducir la fecha de aprobación del presupuesto ya que o bien no consta en la documentación, o bien se encuentra en la situación de presupuesto prorrogado.

Aún cuando la legislación permite en casos excepcionales la aprobación del presupuesto con fecha posterior al primero de Enero del ejercicio al que corresponda, se considera que, atendiendo a una de sus funciones - esto es, ser un documento contable que permite la planificación económica de la Corporación, con una vigencia anual - y para una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos, la aprobación del mismo deberá realizarse con anterioridad al comienzo del ejercicio en el que deba aplicarse. En la medida en que se apruebe con retraso, se está distorsionando uno de los fines del mismo, con el consiguiente deterioro de los servicios prestados por las Corporaciones.

Se recomienda, por lo tanto, a las Corporaciones que tramiten el expediente de aprobación del presupuesto anual con la debida celeridad para que en todo caso, pueda entrar en vigor el primero de Enero del ejercicio al que corresponda.

2.2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

En el análisis de la documentación recibida se ha puesto especial hincapié en la comprobación de las fechas de aprobación o no por parte del Pleno de las Corporaciones, de las distintas cuentas, considerando como plazo límite el 1 de Octubre de 1991. El resultado del examen se resume en el siguiente cuadro:

Aprobación en plazo de las cuentas por el Pleno de las Corporaciones (antes del 1 de Octubre)

Provincia	Presupuesto T	Presupuesto Nº	Presupuesto %	Patrimonio Nº	Patrimonio %	Tesorería Nº	Tesorería %	VIAP Nº	VIAP %
Almería	72	26	36	18	25	41	57	41	57
Cádiz	24	5	20	3	12	14	58	9	37
Córdoba	61	28	45	24	39	35	57	29	47
Granada	122	58	47	45	37	53	43	68	56
Huelva	44	12	27	11	25	15	34	17	39
Jaén	69	14	20	10	14	27	39	27	39
Málaga	54	18	33	8	15	26	48	24	44
Sevilla	71	21	29	13	18	35	49	24	34
General	517	182	35	132	26	246	48	239	46
Diputaciones	8	3	37	1	12	7	87	4	50
Total	525	185	35	133	25	253	48	243	46

Del cuadro anterior, se deducen las siguientes conclusiones:

Del total de Corporaciones que han remitido documentación, que han ascendido a 525 Corporaciones, tan solo los Plenos de 185 Corporaciones han aprobado en plazo la Cuenta General del Presupuesto, esto es, antes del 1 de Octubre de 1991. El resto de Corporaciones que han remitido Información, esto es, 340, se encuentran en las situaciones siguientes: sus cuentas han sido aprobadas con posterioridad, no han sido aprobadas o bien, de la documentación remitida no se deduce la fecha de aprobación de las mismas.

De esto se deduce que del total de Corporaciones Locales Andaluzas que ascienden a 774 (766 Ayuntamientos y 8 Diputaciones Provinciales) tan sólo los Plenos de 185 Corporaciones, han aprobado las cuentas en plazo, lo que representa un 24 % de Corporaciones lo cual, es indicativo de la falta de rigor existente en las Corporaciones Locales Andaluzas en relación a la formación y aprobación de las cuentas por los respectivos Plenos.

Este porcentaje, tan sólo se muestra un poco más elevado en relación a la aprobación de la Cuenta de Tesorería, ya que han sido aprobadas por un total de 253 Corporaciones, lo que representa un 33 % del total. Porcentaje que sigue siendo muy poco representativo con respecto al total de Corporaciones.

2.3.- RENDICIÓN DE CUENTAS

	Corporaciones Locales Nº	%	Según Población Miles Habit.	%
EN PLAZO	43	6	108	2
Con Retraso				
0 a 3 meses	284	37	2.681	38
Más de 3 meses	198	25	2.816	40
TOTAL retraso	482	62	5.497	78
Total Recibidas	525	68	5.605	80
Total CCLL	774	100	6.971	100

Del cuadro anterior, se deducen las siguientes conclusiones:

1º) Del total de Corporaciones Locales Andaluzas que ascienden a 774, han rendido sus cuentas a esta Institución un total de 525 lo que supone un 68 % de Corporaciones Locales con respecto al total de Entidades y dado que el mayor porcentaje de información recibida se ha concentrado en Ayuntamientos de mayor volumen de población, el total de contestaciones representan un 80 % en relación a la población Andaluza.

2º) Si se tiene en cuenta el número de Corporaciones que han rendido sus cuentas en el plazo establecido en la Legislación, esto es, antes del primero de Noviembre, se observa que tan sólo 43 Entidades, lo han hecho en plazo.

Los aspectos señalados, suponen un elemento negativo en la valoración de la gestión de los Ayuntamientos Andaluces, y se corresponde con una situación tipificada como infracción susceptible de originar expedientes administrativos tendentes a depurar posibles responsabilidades tal y como establece el Título VII del Real Decreto Legislativo 1.091/1988 de 23 de Septiembre por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

En este apartado, se hacen algunos comentarios sobre los resultados de la gestión de las distintas Corporaciones Locales, a partir de los datos que se reflejan en las liquidaciones presupuestarias recibidas. Sin embargo, hay que hacer las siguientes matizaciones:

1º) El número de Entidades locales que han servido de base para el análisis han sido aquellas que han respondido a la solicitud de información y que han ascendido a 525 (517 Ayuntamientos y 8 Diputaciones Provinciales). Por lo tanto, las conclusiones, y comentarios expuestos, hay que tomarlos con las consiguientes cautelas ya que, de haber dispuesto de los estados contables de todos los Ayuntamientos andaluces podrían haberse detectado situaciones distintas a las puestas de manifiesto, pudiendo haber llegado a conclusiones diferentes a las descritas.

2º) Es conveniente destacar que, las Corporaciones tienden a canalizar a través de las Cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto ingresos y gastos que tienen carácter presupuestario. Por lo tanto, las cifras reflejadas en las liquidaciones del presupuesto no incluyen todas las operaciones de la Corporación correspondiente y, por lo tanto, los estados agregados tienen el mismo defecto.

3.1- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA INICIAL Y SUS MODIFICACIONES

En este apartado, se comentan las distintas conclusiones, distinguiendo entre las Diputaciones Provinciales y el conjunto de Ayuntamientos tratados.

La estructura presupuestaria del conjunto de Corporaciones es la siguiente en millones de pesetas.

Diputaciones Provinciales

	Ppto. Refundido	Modificación	Prev.Definitiva
Resultas Ingresos	58.819	--	58.819
Ingresos	130.179	10.121	140.300
Total Ingresos	188.998	10.121	199.119
Resultas Gastos	59.659	48	59.707
Gastos	113.581	37.613	151.194
Total Gastos	173.240	37.661	210.901
Diferencia	15.758	(27.540)	(11.782)

Ayuntamientos

	Ppto. Refundido	Modificación	Prev.Definitiva
Resultas Ingresos	162.091	(687)	161.404
Ingresos	320.626	32.646	353.272
Total Ingresos	482.717	31.959	514.676
Resultas Gastos	144.153	(1.114)	143.039
Gastos	320.551	61.213	381.764
Total Gastos	464.704	60.099	524.803
Diferencia	18.013	(28.140)	(10.127)

En relación con la estructura Presupuestaria Inicial y sus Modificaciones:

De los estados agregados anteriores, se observa lo siguiente:

1º) Los Presupuestos Refundidos tanto de las Diputaciones Provinciales como el correspondiente al conjunto de Ayuntamientos, arrojan un Superávit inicial de 15.758 millones de pesetas y 18.013 millones de pesetas respectivamente procedentes de las liquidaciones presupuestarias del ejercicio 1989.

Sin embargo estos superávits son fruto de la agregación de todos los Ayuntamientos pero existen Corporaciones que parten de un presupuesto Refundido con déficit inicial, como consecuencia de haberse incorporado al presupuesto inicial las resultas del ejercicio anterior.

En estos casos, no se ha apreciado que se haya actuado conforme establece el artículo 452 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril. (Esta situación también se establece en el artículo 174 de la Ley 39/88).

Por lo tanto, se recomienda a las Corporaciones que si la liquidación del presupuesto de un ejercicio arroja déficit, éste debe ser cubierto prescindiendo de gastos que tengan el carácter de voluntarios, o bien cubrirla al formular el nuevo presupuesto con un superávit inicial por importe de, al menos, el déficit del ejercicio anterior.

En cuanto a las Diputaciones Provinciales las de Granada y Málaga presentan déficit inicial de 136 millones de pesetas y 2.940 millones de pesetas respectivamente por lo que se insta a éstas que a la hora de efectuar sus nuevos presupuestos, se atengan a lo establecido en el precepto legal anteriormente citado.

2º) En cuanto a las modificaciones presupuestarias, los importes correspondientes a los capítulos de Ingresos han ascendido a 10.121 millones de pesetas los de las Diputaciones Provinciales, y a 31.959 millones de pesetas los relativas a los Ayuntamientos.

Por su parte las modificaciones de gastos han alcanzado un importe de 37.661 millones de pesetas y 60.090 millones de pesetas respectivamente.

Estos importes han supuesto unos porcentajes de modificación de gastos que ascienden al 22 % y 13 % respectivamente.

Dichas modificaciones de los créditos iniciales, han originado un déficit en los presupuestos definitivos por importe de 11.782 millones de pesetas y 10.127 millones de pesetas respectivamente.

Esto ha venido como consecuencia de la inadecuada o inexistente financiación de las modificaciones de crédito ya que se observa que las del presupuesto de gastos, han sido muy superiores a las modificaciones del presupuesto de ingresos y a los superávits de las liquidaciones del ejercicio anterior. Se insiste, por lo tanto, en la recomendación de financiar las modificaciones presupuestarias de gastos con alguna de las tres posibilidades siguientes: con el superávit de la liquidación del ejercicio anterior, con altas en conceptos de ingresos cuya recaudación se estime cierta o bien con bajas en conceptos de Gastos cuya realización no se estime necesaria.

3º) En cuanto a la estructura de la previsión definitiva de las Corporaciones se ponen de manifiesto los siguientes aspectos:

Al margen de la situación de déficit en la previsión definitiva comentada anteriormente, se observa la siguiente estructura de los capítulos de gastos:

El conjunto de Diputaciones Provinciales dedica un 16 % destinado a gastos de personal, siendo las Diputaciones de Sevilla, Huelva y Córdoba las que mayores porcentajes alcanzan y Jaén la que menos. En cuanto a los Ayuntamientos, el porcentaje general de las Corporaciones agregadas alcanza un 18 % en este capítulo destacando por provincias la de Córdoba, con un 24 % de los gastos previstos a destinar en materia de personal.

En cuanto a los créditos destinados a gastos de Capital (Inversión y Transferencias de capital) se pueden hacer las siguientes comparaciones:

El conjunto de Diputaciones Provinciales alcanza un porcentaje de 24 % en su conjunto, siendo la Diputación de Almería la que mayor importe de créditos iniciales dedican a inversiones estructurales.

Por su parte, el conjunto de Ayuntamientos alcanza un ratio del 23% en cuanto al volumen de inversiones, destacando el agregado de Ayuntamientos de la provincia de Málaga con un 28 % de los gastos inicialmente previstos a destinar a inversiones estructurales y transferencias de capital.

En cuanto a los ratios relativos a los endeudamientos se ponen de manifiesto los elevados importes consignados inicialmente en los presupuestos, que arrojan unos valores del 39 % y 32 % para las Diputaciones y Ayuntamientos respectivamente. Si se compara este ratio entre los distintos Estados agregados por tramos de población, se observa que éste va creciendo en función de la población del municipio. Así, para el conjunto de Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, el ratio es de 10 %, mientras que para el conjunto de Ayuntamientos con población superior a los 50.000 habitantes el ratio alcanza el 41 %.

Este índice está calculado por la relación existente entre los créditos consignados para afrontar intereses y amortizaciones de préstamos (tanto las operaciones a largo plazo como las operaciones de tesorería) en relación a los importes presupuestados como ingresos corrientes (Capítulos I al V de ingresos).

Este ratio así calculado es diferente del índice de carga financiera al que se refiere la legislación en los artículos 424 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y al artículo 54 de la Ley 39/1988, ya que para calcular el índice de carga financiera según estos preceptos es necesario tener en cuenta una serie de información sobre ingresos, gastos y avales, que del análisis efectuado no es posible llevar a cabo.

3.2.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS DE EJECUCIÓN

Se exponen a continuación las distintas conclusiones a las que se ha llegado como consecuencia del análisis de las liquidaciones presupuestarias de la Corporación.

Las liquidaciones presupuestarias agregadas arrojan los siguientes importes:

Diputaciones Provinciales.

(Millones de pesetas)

	Previsión Definitiva	Dchos/Oblig Liquidadas	Recaud/pagos Líquidos	Pendiente Cobro/Pagos	Estado Ejecución
Ingresos	199.119	188.165	129.135	59.030	(10.954)
Gastos	210.901	191.430	120.499	70.931	(19.471)
Diferencias	(11.782)	(3.265)	8.636	(11.901)	8.517

Ayuntamientos

(Millones de pesetas)

	Previsión Definitiva	Dchos/Oblig Liquidadas	Recaud/pagos Líquidos	Pendiente Cobro/Pagos	Estado Ejecución
Ingresos	514.676	500.937	313.620	187.317	(13.739)
Gastos	524.806	487.783	282.938	204.845	(37.023)
Diferencias	(10.130)	13.154	30.682	(17.528)	23.284

De los cuadros anteriores, se deducen los siguientes comentarios:

1º) La liquidación presupuestaria agregada de las Diputaciones Provinciales, arroja un déficit de 3.265 millones de pesetas, que se concentra en las Diputaciones de Granada, Málaga y Cádiz.

Por su parte, la liquidación presupuestaria agregada de los Ayuntamientos, arroja una liquidación con superávit que alcanza los 13.154 millones de pesetas.

Sin embargo, la provincia de Cádiz, arroja un déficit en la liquidación que asciende a 2.207 millones de pesetas. Además, prácticamente en todas las provincias aparecen Ayuntamientos con liquidaciones presupuestarias individuales que arrojan déficit en sus liquidaciones.

A estas Corporaciones se les ha instado a que actúen según establece el artículo 452 del Real Decreto legislativo 781/1986 y el artículo 174 de la ley 39/88.

Por otra parte, si se observa la materialización de ese superávit se desprende que existe un volumen de derechos pendientes de cobro que ascienden a 59.030 millones de pesetas y 187.317 millones de pesetas, que representan unos porcentajes del 31 % y 37 % respectivamente tomados como los importes pendientes de cobro en relación a los derechos liquidados.

Esto quiere decir que, dado el elevado importe que se encuentra pendiente de cobro por parte de las Corporaciones, pudieran existir derechos liquidados cuya recaudación efectiva pudiera ser de muy difícil o imposible recaudación, lo que disminuiría el superávit acumulado de las Corporaciones. Este aspecto ha sido observado prácticamente en la totalidad de los Ayuntamientos que han sido revisados.

2º) Los niveles de ejecución presupuestaria alcanzados en los capítulos de ingresos han sido del 94 % relativo a las Diputaciones y del 97 % relativo a los Ayuntamientos. Entre éstos, los porcentajes más elevados han sido los correspondientes a los Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.

En relación a la ejecución presupuestaria de los capítulos de gastos los porcentajes alcanzados han sido del 93 % tanto para el conjunto de Diputaciones como para el conjunto de Ayuntamientos. Estos porcentajes se pueden considerar aceptables en su conjunto.

En cuanto al grado de recaudación, esto es, el porcentaje de derechos liquidados que se consigue materializar en efectivo, suponen un 69 % y 63 % para los agregados de Diputaciones y Ayuntamientos, grado que se considera bajo. Además, el porcentaje de recaudación que se consigue en los capítulos de Resultas gira en torno al 50 % de los derechos liquidados lo que motiva el consiguiente incremento de las resultas de un ejercicio a otro.

Además hay que tener en cuenta que del importe que aparece como recaudación líquida en el capítulo de Resultas, hay que disminuir el importe de la Tesorería inicial con lo que se agrava la situación anteriormente descrita.

En relación a los derechos que se encuentran pendientes de cobro, se ha efectuado una revisión con mayor detalle para los Ayuntamientos con población mayor a 50.000 habitantes y las conclusiones se presentan en el punto 5.

Como recomendación general de todo esto, se insiste en poner en práctica medidas concretas tendentes a mejorar la gestión recaudatoria de los distintos derechos a favor de las Corporaciones.

Asimismo, se recomienda que se mantenga un criterio de prudencia a la hora de reconocer derechos en los distintos capítulos de ingresos, con idea de no reconocer derechos cuya recaudación pudiera no llegar a ser cierta, que condujeran a la obtención de un superávit irrealizable, al estar condicionado a un importe pendiente de cobro de difícil o imposible recaudación.

Por otra parte, en cuanto a los capítulos de Resultas convendría efectuar un análisis de las cantidades pendientes de cobro y pago, verificando la existencia o no de cantidades que pudieran estar prescritas, efectuando las depuraciones que correspondan.

4.- ANÁLISIS DE OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS CORPORACIONES LOCALES

En relación al análisis efectuado de la Tesorería de las Corporaciones Locales, se han puesto de manifiesto las siguientes conclusiones:

1º) Del Acta de Arqueo de algunas Corporaciones se desprende la existencia de pagos efectuados y que no están contabilizados. En otras Corporaciones, se mantienen saldos en Caja que sobrepasan excesivamente el límite que se considera aceptable para sus respectivos tamaños.

Por lo que se refiere a los importes en metálico, debe indicarse que la administración de fondos públicos responde mejor a los principios de seguridad y de control interno si se depositan y gestionan a través de entidades bancarias.

Sería conveniente que se redujese la existencia de metálico en Caja, pues en la misma sólo debe existir efectivo para atender pequeños pagos.

De igual forma se recomienda que el Presidente de la Corporación, previos los informes oportunos, fije tanto la cantidad máxima de fondos que puede existir en metálico en la caja como el importe en efectivo máximo de cada pago, mientras no sea reglamentariamente desarrollado el artículo 178.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Por el contrario, si dicho saldo no fuese en su totalidad realmente metálico, un determinado número de obligaciones comprometidas y satisfechas no fueron objeto de imputación a su correspondiente presupuesto, posiblemente por falta de crédito.

En lo que respecta a la no consignación de determinados pagos, posiblemente por la falta de créditos, es una práctica incorrecta, debiéndose contabilizar los gastos en el momento en que se comprometen y con cargo al presupuesto en vigor.

Debe recordarse en este punto que el artículo 154 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales precisa en su párrafo 5 que "*no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan lo expresado en la norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar*".

2º) Algunas Corporaciones mantienen cuentas bancarias con saldo deudor (números rojos) al cierre del ejercicio.

Las Entidades deben extremar las medidas para evitar que se produzcan descubiertos, con los riesgos de posibles cargas financieras, especialmente si existe suficiencia global en el conjunto de la tesorería.

3º) Por su parte, algunos Ayuntamientos mantienen abiertas un excesivo número de cuentas bancarias para sus necesidades operativas. Algunas cuentas tienen escaso movimiento a lo largo del ejercicio.

Se considera que un elevado número de cuentas corrientes, debilita el control interno de la Tesorería, impide una gestión eficaz de la misma y ocasionó un trabajo administrativo que podría ser evitado.

A tal efecto, el artículo 119.3 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria establece la cancelación de aquéllas cuentas para las que se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura.

4º) Se ha observado en numerosas Corporaciones, que no existen diferencias entre los saldos consignados en el acta de arqueo y los que indican las entidades bancarias.

Esto puede ocurrir si a fin de ejercicio no se ha realizado ninguna operación de pagos o ingresos. No obstante, también puede obedecer a la práctica, de todo punto incorrecta, de contabilizar los movimientos cuando son notificados por las entidades bancarias. En este caso, se recomienda que las operaciones se contabilicen en el mismo momento en que se expiden los documentos de pago (talones, transferencias, etc.) o se realicen los ingresos con independencia de la fecha de notificación de las entidades financieras.

5º) En cuanto a la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, se ha detectado que en esta se recogen operaciones que por su naturaleza deben contabilizarse en el presupuesto.

El principio contable de unidad y universalidad significa que el presupuesto de las entidades públicas debe ser único e incluir la totalidad de gastos e ingresos.

Este principio queda recogido en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, al menos en los artículos 143, 144, 146 y 147 y desarrollado específicamente, en la materia que aquí interesa recoger, en el artículo 43.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril.

En concreto, se traduce en que el presupuesto de la entidad local debe recoger la totalidad de los recursos liquidados durante el ejercicio así como las obligaciones reconocidas durante el mismo, debiéndose aplicar a los presupuestos por su importe íntegro, estando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados. Los recursos de la Entidad Local se destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectos a fines determinados.

En definitiva, el instrumento del presupuesto se convierte en el eje de la actividad económica de la entidad local.

Es muy posible que determinadas operaciones que en su día se recogían en presupuestos extraordinarios hayan estado en este ejercicio contabilizadas dentro de VIAP, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado.

Las subvenciones y otros recursos recibidos para financiar, total o parcialmente, obras o servicios deben liquidarse en su correspondiente concepto presupuestario, al igual que debe reconocerse el gasto en su aplicación correspondiente.

Si los presupuestos aprobados inicialmente no contemplan la posibilidad de estos recursos, una vez recibidos -o con una previsión cierta de que se van a recaudar- debe procederse a su modificación (expediente de generación de créditos por nuevos ingresos), y contabilizar adecuadamente las diferentes fases presupuestarias de la gestión de los ingresos y los gastos.

Se recomienda, pues, que se analicen las diferentes operaciones contabilizadas en VIAP, especialmente en la rúbrica de "Operaciones diversas" y se proceda a las regularizaciones que correspondan.

5.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE LOS AYUNTAMIENTOS MAYORES DE 50.000 HABITANTES

Se ha analizado con detalle la composición de los derechos pendientes de cobro de los Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.

En la Comunidad Autónoma, hay un total de 19 Ayuntamientos en este tramo de población, que son: Alcalá de Guadaira, Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, El Puerto de Santa María, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, la Línea de la Concepción, Linares, Málaga, Marbella, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla y Vélez-Málaga.

Sin embargo, de éstas, no se ha recibido la documentación de los siguientes Ayuntamientos: Cádiz, Jerez de la Frontera, San Fernando y Vélez-Málaga.

Así, de los 19 Ayuntamientos que componen este tramo de población, sólo se han podido analizar las cuentas de 14 Ayuntamientos. Además, de éstos, no todos han presentado la documentación de forma homogénea en cuanto al nivel de desglose de los distintos epígrafes, por lo que se ha tenido que efectuar agregaciones de las mismas para poder efectuar el análisis de forma homogénea.

Los derechos pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 1990, han ascendido a 116.457 millones de pesetas, de los cuales 52.721 millones de pesetas corresponden a derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.

La distribución de los mismos en cuanto a operaciones corrientes y de capital es la siguiente:

	1990		Resultas		TOTAL	
Operaciones Corrientes	25.011	39%	27.840	53%	52.851	45%
Operaciones de Capital	38.725	61%	24.881	47%	63.606	55%
	63.736	100%	52.721	100%	116.457	100%

De la composición de los derechos pendientes de cobro, se desprenden las siguientes conclusiones:

1º) Del total de derechos pendientes de cobro que ascienden a 116.457 millones de pesetas, se distribuye un 45 % en operaciones corrientes y un 55 % en operaciones de capital.

Sin embargo, conforme va creciendo la antigüedad de los derechos, los porcentajes se van concentrando en operaciones corrientes. Así, la relación del ejercicio 1990, es del 39 % y 61 % entre operaciones corrientes y de capital mientras que del conjunto de las Resultas, la composición es del 53 % y 47 % respectivamente.

2º) En cuanto a la naturaleza de los derechos que se encuentran pendientes destacan entre las operaciones de capital, los relativos al capítulo IX - Variación de Pasivos Financieros- llegando a quedar como pendiente de cobro un 37 % de los derechos reconocidos.

Otro apartado que destaca en cuanto al volumen que queda pendiente de cobro, es el relativo a las transferencias de capital, que provienen de otras administraciones bajo la forma de subvenciones y que en muchos casos, su cobro está condicionado a la realización de algún proyecto de inversión.

En cuanto a las operaciones corrientes los mayores importes pendientes de cobro se concentran en los capítulos I, II y III, esto es, Impuestos Directos, Indirectos y Tasas.

Conforme va aumentando la antigüedad de los derechos, los epígrafes que se muestran con unos grados de recaudación más bajos son precisamente los relativos a los distintos tributos municipales.

De entre éstos, destacan entre los que tienen un mayor importe pendiente de cobro, los relativos a la Contribución Territorial tanto Rústica como Urbana, así como el Impuesto sobre Circulación de Vehículos. Por otra parte, en cuanto a las principales Tasas que se encuentran pendientes destacan las de Abastecimiento de Aguas, Recogida de Basuras y Alcantarillado.

Además, en cuanto a la antigüedad conviene hacer hincapié en que la mayoría de los Ayuntamientos analizados tienen en sus cuentas, derechos pendientes de cobro con antigüedad superior a los cinco años. Todo esto, es indicio de la existencia de derechos reconocidos cuya recaudación efectiva se muestra de muy difícil o imposible realización.

Por lo tanto, se insta a las distintas Corporaciones que lleven a cabo cuantas acciones consideren necesarias para elevar los niveles de recaudación de los distintos tributos, actualizando convenientemente los padrones de los mismos, las Ordenanzas fiscales, etc...

Asimismo, conviene efectuar un estudio exhaustivo de la composición de los distintos derechos pendientes de cobro comprobando las posibilidades reales de materialización de los mismos efectuando, en su caso, las depuraciones que correspondan.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo A: Diputaciones	3	3	---
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.	1	1	---
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes.	19	15*	3
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.	709	36	284

* El Ayuntamiento de Jaca no se ha incluido en la muestra seleccionada pues sus cuentas estaban siendo objeto de una fiscalización especial de este Tribunal.

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye las tres Diputaciones provinciales y 52 municipios, con un total de 819.810 habitantes.

De dichas Corporaciones destaca el Ayuntamiento de Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma, con una población de 592.686 habitantes, 72 % del grupo, y un presupuesto de 42.937 millones (47 % del total).

Los ingresos por operaciones corrientes suponen el 60 % del total de ingresos previstos para el ejercicio, siendo los ingresos tributarios la partida más importante, con el 36 % del total, seguidos por los procedentes de operaciones financieras, con el 24 %, ocupando el último lugar los de capital, con un 16 %.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes ascienden al 55 % de los gastos totales, los de capital a un 39 % y los financieros al 6 % restante.

Las resultas de ejercicios cerrados importan, en ingresos, el 35 % del presupuesto refundido y en gastos el 33 %, cifras que se estiman elevadas.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 16.728 millones de pesetas, que suponen el 12 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones asciende a un 18 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse cuantitativamente normales.[7]

[7] A título indicativo, se clasifican las modificaciones anuales de los créditos presupuestarios en los siguientes tipos: a) Normales o aceptables, inferiores al 15 por ciento del presupuesto refundido inicial; b) Cuantía media, las comprendidas entre el 15 % y el 25%, y c) Elevadas, las superiores al 25%; deben ser analizadas muy detenidamente para evaluar su origen.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a pasivos financieros (capítulo 9), por el 62 %, a inversiones reales, por un 14 %, y a la compra de bienes y servicios, por un 10 %.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El contraído de los derechos por operaciones corrientes asciende al 55 % de los totales, correspondiendo un 10 % a los procedentes de operaciones de capital y un 35 % a los de operaciones financieras.

El contraído de las obligaciones por operaciones corrientes suponen el 59 % del total, destinándose el 32 % a operaciones de capital y el 9 % restante a las financieras, esencialmente para amortizar los préstamos pendientes.

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos ofrecen un superávit de 25.908 millones de pesetas. Este superávit se produce como consecuencia del superávit de las operaciones corrientes y los préstamos concertados, así como por el efecto positivo de las resultas de ejercicios cerrados. El desglose de este resultado es el siguiente:

· Por resultas de ejercicios cerrados	6.826 millones de pts.
· Por ejercicio corriente	19.082 millones de pts.
Suma (superávit)	25.908 millones de pts.

e) Indicadores significativos.

Estos indicadores se han calculado, en general, de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989, sobre estructura de los presupuestos de las entidades locales.

- La formación bruta de capital ha sido de 15.221 millones de pesetas, lo que supone el 13 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, las obligaciones reconocidas excedieron a los derechos liquidados en 254 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, tanto por operaciones corrientes como de capital, han representado el 7 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido de 93 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros ha sido positiva, con 27.766 millones de pesetas de incremento del endeudamiento.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Diputaciones Provinciales.

Han rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno en las tres Diputaciones.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta por el único Ayuntamiento incluido en el grupo, Zaragoza, y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes

Los 15 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Los 36 Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

Diputaciones Provinciales.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en las tres Diputaciones consideradas.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación el Ayuntamiento de Zaragoza.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

De los 15 Ayuntamientos que forman este grupo han rendido esta cuenta 13, quedando 2 pendientes, Binefar y Calatayud.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno en todos los casos.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Diputaciones Provinciales

Todas las Diputaciones han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por los Plenos correspondientes.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran el grupo, con la excepción del de Utebo. Asimismo han sido aprobadas por el Pleno en todos los casos.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Diputaciones Provinciales

Las tres Diputaciones integradas en este grupo han rendido esta cuenta, que no consta que haya sido aprobada en la Diputación de Zaragoza.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido esta cuenta, que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, pero no consta haya sido aprobada en los de Calatayud y Utebo.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más detacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. El Ayuntamiento de Molinos (Teruel) ha aprobado los presupuestos con un déficit inicial.

3.2.2. Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son mayores que los ingresos corrientes.

Esta anomalía se ha producido en las cuentas de los Ayuntamientos de Binefar, Tosos, Montón, Camarena de la Sierra, Manchones, Casbas, Castejón, Nuévalos y Osera.(9).

3.2.3. Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el artículo 452 del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una constante en la legislación de las Haciendas Locales y ha sido confirmada en el artículo 146 de la Ley 39/1988, reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en cinco Ayuntamientos (Calatayud, Fraga, Monzón, Tosos y Celadas).

3.2.4. Se han contabilizado como ingresos en las Cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, las subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalía se produce en 5 de las 19 cuentas examinadas, el 26 % del total. (Zaragoza, Teruel, Monzón, Barbastro y Andorra).

3.2.5. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deberían comprobar la posible existencia de valores prescritos que deben ser dados de baja en las cuentas.

Se encuentran en este caso tres Corporaciones (Zaragoza, Barbastro, y Egea de los Caballeros).

3.2.6. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, y también se registran desajustes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos, como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Esta anomalía se observa en 8 de las cuentas examinadas, el 47 % del total (Diputación de Teruel y los Ayuntamientos de Teruel, Sabiñánigo, Almunia de Doña Godina, Alcañiz, Egea de los Caballeros, Andorra y Zuera).

3.2.7. En la Cuenta de Administración de Patrimonio, los bienes que integran el activo no están clasificados en los grupos que establece el Reglamento de Bienes, en la Diputación de Teruel y en los Ayuntamientos de Teruel, Alagón, Sabiñánigo y Andorra.

3.2.8. Se incluyen en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto ingresos y pagos que tienen la condición de presupuestarios, en las Diputaciones de Teruel y Zaragoza y Ayuntamientos de Zaragoza, Calatayud, Zuera y Egea de los Caballeros.

3.2.9. El resultado que figura en el acta de arqueo al 31 de diciembre de 1990 no ha sido conciliado con las notas o extractos de los Bancos en dos Ayuntamientos (Utebo y Andorra) ni se ha aportado por éstos la documentación justificativa adecuada.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Asturias, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.	5	5	
Grupo C: Ayuntamiento entre 5.000 y 50.000 habitantes.	29	23	6
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.	44	3	10

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

En el cuadro no figura el estrato del Grupo A) porque dado el carácter uniprovincial de la Comunidad Autónoma, no posee Diputación.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye 31 municipios y reúne un total de 969.984 habitantes.

De ellos destacan Oviedo, capital de la Comunidad Autónoma, con una población de 185.864 habitantes, 19 % del grupo, y un presupuesto de 8.561 millones, (el 22 % del total) y Gijón, la ciudad más poblada, con 264.948 habitantes (el 27 % del colectivo) y un presupuesto de 12.644 millones de pesetas (el 32 % del total).

Los ingresos por operaciones corrientes suponen el 81 % del total de ingresos, los procedentes de operaciones financieras, el 10 % del total, y los de capital, el 9 %.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes ascienden al 69 % del total previsto, los de operaciones de capital, al 27 %, quedando un 4 % para las financieras, especialmente amortización de las operaciones de crédito.

Las resultas de ejercicios cerrados suponen, en ingresos, el 28 % y, en gastos, un 22 %, ambos del presupuesto refundido final, y pueden considerarse normales.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 6.048 millones de pesetas, que suponen el 12 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones asciende a un 15 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a inversiones reales, por el 46 %, a la compra de bienes y servicios, por el 22 %, y a la amortización de pasivos financieros, por el 14 %.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El contraído de los derechos por operaciones corrientes asciende al 81 % de los totales, correspondiendo un 8 % a los procedentes de operaciones de capital y un 11 % a los de operaciones financieras.

El contraído de las obligaciones por operaciones corrientes suponen el 68 % del total, destinándose el 27 % a operaciones de capital y el 5 % restante a las financieras, casi su totalidad para amortizar los préstamos pendientes.

Destacan los Ayuntamientos de Castropol y Cudillero, en los que los ingresos por operaciones corrientes ascienden al 100 % de los ingresos totales y los gastos por operaciones corrientes suponen el 65 % y el 94 % de los gastos totales, respectivamente.

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos ofrecen un superávit de 6.517 millones de pesetas. Este superávit se produce como consecuencia del de operaciones corrientes y financieras y por el efecto positivo de las resultas de ejercicios cerrados. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	2.967 millones de pts.
- Por ejercicio corriente	3.550 millones de pts.
Suma (superávit)	6.517 millones de pts.

e) Indicadores significativos

- La formación bruta de capital ha sido de 9.418 millones, lo que supone el 17 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 1.775 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, han representado el 35 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido negativa (reducción) en 57 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros ha sido positiva, con 2.646 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

Las deficiencias y prácticas irregulares observadas en el examen y comprobación de las cuentas se han puesto de manifiesto individualizadamente a las Corporaciones Locales para que, en el plazo concedido a tal efecto, presentasen las alegaciones que, a su juicio, estimasen oportunas.

Examinados los escritos de alegaciones recibidos y atendidas, en su caso, cuando así ha resultado procedente, se registran una serie de irregularidades que se indican a continuación.

3.1.- DEDUCIDAS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta en los cinco Ayuntamientos incluidos en el grupo y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en todos los casos.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes

Los 23 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 21 casos, no constando su aprobación en los 2 restantes (Siero y Grado)

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Los tres Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en todos los Ayuntamientos incluidos en el grupo, con la excepción de Langreo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

De los 23 Ayuntamientos que forman este grupo han rendido esta cuenta 16, quedando 7 pendientes (San Martín del Rey Aurelio, Corvera, Laviana, Navia, Tineo, Soto del Barco y Ribadesella)

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, excepto en el Ayuntamiento de Grado.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de los cinco Ayuntamientos que forman el grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran este grupo, con la excepción de Pravia y Aller. Asimismo ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos contemplados.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este colectivo han rendido esta cuenta, que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos del grupo han rendido esta cuenta, excepto Ribadesella, Laviana y Gozón, habiendo sido aprobada por el Pleno en todos los casos, con la única excepción del Ayuntamiento de Pravia.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. El presupuesto se ha aprobado con déficit en los Ayuntamientos de Nava y Laviana.

3.2.2. No coinciden los saldos finales a 31 de diciembre de 1989 con los iniciales de 1 de enero de 1990 en las respectivas Cuentas anuales de Presupuesto.

Se han encontrado diferencias de este tipo en los saldos pendientes de cobro y de pago de los Ayuntamientos de Oviedo, Navia y Vegadeo.

3.2.3. Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son mayores que los ingresos corrientes.

Esta anomalía se ha producido en las cuentas del Ayuntamiento de Ribadesella.

3.2.4. Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el artículo 452 del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una constante en la legislación de las Haciendas Locales y se ha confirmado en el artículo 146 de la Ley 39/1988, reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en cinco Ayuntamientos (Laviana, Pravia, Lena, Parres y Nava).

3.2.5. Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalía es, con diferencia, la más frecuente en esta Comunidad, ya que se encuentra en 13 de las 31 cuentas examinadas (42 % del total): Mieres, Laviana, Vegadeo, Tineo, Ribadesella, Lena, Llanera, Cudillero, Grado, Gozón, Parres, Soto del Barco y Salas.

3.2.6. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deberían comprobar la posible existencia de valores prescritos para ser dados de baja en las cuentas.

Se encuentra en este caso la Corporación de Navia.

3.2.7. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, provocando desajustes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Esta anomalía se observa en 7 de las cuentas examinadas (22 % del total): Mieres, Cudillero, Grado, Llanera, Carreño, Nava y Salas.

3.2.8. Carencia de información sobre la recaudación, por no rendir cuentas los Recaudadores de la Corporación o los Servicios de Recaudación, provinciales o autonómicos, que prestan este servicio a los Ayuntamientos.

Esta irregularidad se observa en 22 Ayuntamientos: en 10 Ayuntamientos en periodo de recaudación voluntaria y en 12 en periodo de recaudación ejecutiva.

Esta irregularidad afecta al 71 % del colectivo examinado.

3.2.9. El resultado del acta de arqueo al 31 de diciembre de 1990 no ha sido conciliado con las notas o extractos de los Bancos en tres Ayuntamientos (Grado, Aller y Soto del Barco), ni se ha aportado la documentación adecuada.

COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Baleares, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de las investigaciones se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo A: Consejos Insulares	3	3	-
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes	1	1	-
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes	27	25	2
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes	39	2	9

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de os estratos de población indicados en el apartado anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye los tres Consejos Insulares y 28 municipios y reúne un total de 700.307 habitantes.

De ellos destaca Palma de Mallorca, capital de la Comunidad Autónoma, con una población de 325.120 habitantes, el 46 % del grupo, y un presupuesto de 18.050 millones (29 % del total).

Los ingresos previstos por operaciones corrientes suponen el 73 % de los ingresos totales, los ingresos de operaciones financieras, el 14 % y los de capital el 13 %.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes ascienden al 61 % del total, los de capital al 37 % y por último los de operaciones financieras al 2 %.

Las resultas de ejercicios cerrados importan, en ingresos, un 32 % del presupuesto refundido y, en gastos, un 26 %, cifras que se estiman algo elevadas.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por un importe de 11.098 millones de pesetas, que suponen el 13 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. Estas modificaciones ascienden a un 18 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a inversiones reales, por el 39 %, a transferencias corrientes y de capital, por el 31 %, a operaciones financieras, por el 14 %, y a la compra de bienes y servicios, por el 12 %.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El contraído de los derechos por operaciones corrientes asciende al 73 % de los totales, correspondiendo un 9 % a los procedentes de operaciones de capital y un 18 % a los de operaciones financieras.

El contraído de las obligaciones por operaciones corrientes supone el 60 % del total, destinándose el 35 % a operaciones de capital y el 5 % restante a las financieras, esencialmente para amortizar los préstamos pendientes.

Destaca el Ayuntamiento de Marratxi, en el que los ingresos corrientes ascienden al 100 % de los ingresos totales y los gastos por operaciones corrientes al 80 % de los gastos totales.

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos ofrecen un superávit de 6.256 millones de pesetas. Este superávit se produce como consecuencia del de operaciones corrientes y del efecto positivo de las resultas de ejercicios cerrados. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	5.640 millones de pts.
- Por ejercicio corriente	616 millones de pts.
Suma (superávit)	6.256 millones de pts.

e) Indicadores significativos.

- La formación bruta de capital ha sido de 17.399 millones de pesetas, lo que supone el 20 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 886 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, han representado el 34 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido de 44 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros ha sido positiva, con 8.643 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto

Consejos Insulares

Se ha rendido esta cuenta en los tres Consejos incluidos en el grupo y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, con la excepción del Consejo Insular de Menorca, en el que no consta esta aprobación.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

El único Ayuntamiento que integra este grupo, Palma de Mallorca, ha rendido la cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes

Los 25 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 17 casos, no constando su aprobación en los 8 restantes (Manacor, Calviá, Alaior, Campos del Puerto, Formentera, Andratx, Santa Margarita y Artá).

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Los dos Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

Consejos Insulares

Han rendido esta cuenta los Consejos de Menorca e Ibiza y está pendiente el de Mallorca. Unicamente el Pleno del Consejo de Ibiza ha aprobado esta cuenta de forma reglamentaria.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

De los 25 Ayuntamientos que forman este grupo han rendido esta cuenta 23, quedando pendientes dos (Manacor y Felanitx)

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, todas, excepto 5 (Ibiza, Santa Margarita, Campos del Puerto, Formentera y Artá).

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Consejos Insulares

Se ha rendido esta cuenta en los tres Consejos y ha sido aprobada por el Pleno en Mallorca e Ibiza (pendiente Menorca).

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento que forma este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran este grupo. Asimismo ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos, excepto en 8 (Manacor, El Castell, Artá, Capdepera, Santa Margarita, Alcudia, Campos del Puerto y Formentera).

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Consejos Insulares.

Esta cuenta ha sido rendida y aprobada por el Pleno de la Corporación en todas las entidades incluidas en este grupo.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

El Ayuntamiento de este colectivo ha rendido esta cuenta, que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, excepto San Antonio, pero no consta haya sido aprobada en los cinco siguientes: Calviá, Santa Margarita, Alcudia, Capdepera y Artá.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. El presupuesto del ejercicio se ha aprobado con déficit en el Ayuntamiento de Formentera.

3.2.2. Las obligaciones reconocidas exceden los créditos autorizados en el presupuesto en los Ayuntamientos de Soller y Palma de Mallorca.

3.2.3. Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son mayores que los ingresos corrientes, en el del Ayuntamiento de Felanitx.

3.2.4. Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el artículo 452 del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una constante en la legislación de las Haciendas Locales y se ha confirmado en el artículo 146 de la Ley 39/1988, reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en dos Ayuntamientos (Manacor y Formentera).

3.2.5. Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalía es, con diferencia, la más frecuente en esta Comunidad, ya que se encuentra en 11 de las 29 cuentas examinadas, el 39 % del total. (Palma de Mallorca, Ibiza, Ciudadela, Formentera, Santanyí, Alcudia, Artá, Campos del Puerto, Marratxi, Santa Margarita y Andratx).

3.2.6. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deben comprobar la posible existencia de valores prescritos y darlos de baja en las cuentas.

Se encuentran en esta situación 5 Corporaciones (Ibiza, Marratxi, Son Servera, Soller y Capdepera).

3.2.7. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, provocando desajustes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Estas anomalías se observan en 11 de las cuentas examinadas (38 % del total). (Consejo I. Menorca, Palma de Mallorca, Mahón, Ibiza, Soller, Formentera, Son Servera, Alcudia, Alaior, Capdepera y Calviá).

3.2.8. Carencia de información sobre la recaudación en periodo ejecutivo, bien por no rendir cuentas los Recaudadores de la Corporación o los Servicios de Recaudación, que prestan éste a los Ayuntamientos, debiendo éstos vigilar el cumplimiento de la obligación de informar sobre dicha gestión..

Esta irregularidad se observa en 4 Ayuntamientos, que suponen un 14% del colectivo examinado.

3.2.9. La Cuenta General de Presupuesto no ha sido informada por la Comisión Especial de Cuentas en 3 Ayuntamientos (Santa Margarita, Alaior y Campos del Puerto).

3.2.10. No coinciden los saldos finales del activo y del pasivo de la Cuenta de Administración de Patrimonio, en 1989, con los iniciales de 1990 en tres Ayuntamientos (Mahón, Capdepera y Santa Margarita).

3.2.11. El resultado del acta de arqueo, al 31 de diciembre de 1990, no ha podido ser conciliado con las notas o extractos de los Bancos en 2 Ayuntamientos (San Antonio y Formentera).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

1.- ENTIDADES INTEGRANTES DEL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL DE CANARIAS

Las entidades que integran el subsector local a los que se les solicitó la documentación del ejercicio de 1990 son las siguientes:

Ayuntamientos:	78
Cabildos:	7
Entidades locales mayores y consorcios:	8

Las Entidades Locales mayores y consorcios son los siguientes:

- Mancomunidades del Valle de la Orotava (Tenerife).
- Mancomunidad de Municipios de la Isla de Lanzarote para los fines regulados por el Reglamento Nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros (RENSUITAL).
- Mancomunidad del Noroeste (Gran Canaria).
- Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria.
- Consorcio de Tributos de Tenerife.
- Consorcio de Aguas de Fuerteventura
- Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comarca sur de Tenerife.
- Consorcio Museo Nestor (Gran Canaria).

Los cuatro consorcios mencionados son agrupaciones de ayuntamientos en los que participa el cabildo de la isla correspondiente.

Tanto la Mancomunidad del Noroeste como el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comarca Sur de Tenerife, aunque están constituidos, no han tenido actividad económica durante 1990, por lo que no han remitido la documentación solicitada y no han sido considerados en este informe.

2.- LIMITACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA

LIMITACIONES EN DOCUMENTACIÓN RENDIDA

DOCUMENTACIÓN	AYUNTAMIENTOS MENORES 5.000 H. MANC. Y CONS.		AYUNTAMIENTOS ENTRE 5.000 Y 20.000 H.		AYUNTAMIENTOS MAYORES 20.000 H Y CABILDOS		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
1. LIQUIDACIÓN POR CONCEPTOS DE INGRESOS	...	...	40	93,0	21	100	61	65,6
2. LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS DE GASTOS	...	...	40	93,0	21	100	61	65,6
3. LIQUIDACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO	28	96,6	40	93,0	21	100	89	95,7
4. PTE. COBRO IMPOSIBLE O DUDOSA REALIZACIÓN	...	...	...	...	13	61,9	13	13,9
5. OBLIG. RECONOCIDAS SIN DOT. PRESUP.	26	89,6	32	74,4	18	85,7	76	81,7
6. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE LA CUENTA	28	96,6	19	44,2	12	57,1	59	63,4
7. CTA. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	...	...	17	39,5	11	52,4	28	30,1
8. OPERAC. DE CRÉDITO CONCERTADAS	25	86,2	34	79,1	19	90,5	78	83,9
9. ACUERDOS O RESOLUC. OP. CRED. Y AVALES	...	...	...	...	15	71,4	15	46,1
10. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	...	...	...	...	15	71,4	15	16,1
11. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE LAS CUENTAS	...	...	14	32,6	12	57,1	26	27,9
12. RESÚMENES TRIMESTRALES DE LAS CUENTAS	...	...	33	76,7	18	85,7	51	54,8
13. ACTA DE ARQUEO AL 31/12	29	100	40	93,0	21	100	90	96,7
14. CONCILIACIONES DE EXISTENCIAS AL 31/12	28	96,6	35	81,4	17	80,9	80	86,0
15. CONCILIACIONES INDIVIDUALIZADAS	24	82,8	34	79,1	18	85,7	76	81,7
16. FOTOCOPIA DEL LIBRO DE CAJA	21	72,4	30	69,8	16	76,2	67	72,0
17. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE LA CUENTA	...	...	21	48,8	16	76,2	37	39,8
18. CUENTA DE VIAP (FORMULARIO VI)	...	...	25	58,1	11	52,4	36	38,7
19. FOTOC. HOJAS DEL LIBRO DE VIAP	26	89,6	38	88,4	19	90,5	83	89,2
20. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE LA CUENTA	...	...	22	51,2	14	66,7	36	38,7
21. COPIAS CUENTAS DE RECAUDACIÓN	8	27,6	25	58,1	9	42,8	42	45,2
22. ESTADO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA	18	62,1	23	53,5	8	38,1	49	52,7
23. INFORME S/ EL SERVICIO RECAUDATORIO	18	62,1	25	58,1	14	66,7	57	61,3
24. EXP. DE TRAMITACIÓN DE LA CUENTA	4	13,8	16	37,2	8	38,1	28	30,1
25. CTAS. SOCIEDADES MERCANTILES	...	...	2	4,7	6	28,6	8	8,6
26. LIQUID. POR CAPÍTULOS DE LOS ENTES Y SERV.	4	13,8	8	18,6	10	47,6	20	23,6
27. TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ORG. AUTÓNOMOS	23	79,3	21	48,8	14	66,7	58	62,4
28. RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO	23	79,3	31	72,1	17	80,9	71	76,3
29. RELACIÓN DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	...	...	24	55,8	7	33,3	31	33,3
30. RELACIÓN DE AVALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS	...	...	...	...	17	80,9	17	18,3
31. RELACIÓN PERSONAL DE LA CORPORACIÓN	...	...	36	83,7	18	85,7	54	58,1
32. REPAROS DE LEGALIDAD FORMULADOS	22	75,9	28	65,1	14	66,7	64	68,8
33. RELACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES	26	89,7	41	95,3	17	80,9	84	90,3
34. RESÚMENES POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO	17	58,6	35	81,4	16	76,2	68	73,1
35. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DEL PTO. GENERAL	16	55,2	33	76,7	16	76,2	65	69,9

3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

El análisis económico-financiero de la gestión presupuestaria se ha dividido en dos apartados atendiendo a los diferentes grupos de entidades que forman el sector local:

1. Cabildos: que incluye el agregado de los siete cabildos insulares.

2. Ayuntamientos: que incluye el agregado de todos los ayuntamientos y los agregados de cuatro categorías en función de su población:

   Grupo A: Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.

   Grupo B: Ayuntamientos entre 20.001 y 50.000 habitantes.

   Grupo C: Ayuntamientos entre 5.001 y 20.000 habitantes.

   Grupo D: Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

No se ha considerado conveniente incluir en el análisis el agregado de entidades locales mayores (mancomunidades y consorcios).

La información económico-financiera utilizada en el análisis es la obtenida de la agregación de las liquidaciones por capítulos del presupuesto ordinario de 1990 de las entidades que integran cada uno de esos grupos, sumándolas linealmente sin eliminar las posibles transferencias internas entre ellas, ya que éstas son de escasa cuantía.

Se ha optado por no formar el agregado total del sector local, sumando las liquidaciones de cabildos, ayuntamientos y mancomunidades, debido a la importancia que suponen las transferencias de gastos (corrientes y de capital) de los cabildos a los ayuntamientos, procedentes de los arbitrios, y de éstos a las mancomunidades, que en caso de ser agregados aparecerían contabilizados doblemente, lo cual distorsionaría las cifras globales obtenidas y los ratios calculados a partir de ellas.

Por este mismo motivo y por carecer de la información de algunos de ellos, tampoco ha sido posible agregar a la liquidación de los ayuntamientos la de sus respectivos organismos autónomos en los casos en que éstos existen.

Otra limitación de este análisis, es que en el agregado de los ayuntamientos falta la información de la liquidación del presupuesto referida a los ayuntamientos de Agulo, Alajeró (menores de 5.000 habitantes) y Guía de Isora (entre 5.000 y 20.000 habitantes). En el caso de Firgas, aunque no envió la documentación requerida, se dispuso posteriormente de la liquidación del presupuesto de 1990. La población de los 3 ayuntamientos representa el 0'9 % de la población total del archipiélago y sus presupuestos iniciales aproximadamente un 1'1 % del presupuesto total del conjunto de los ayuntamientos canarios.

3.1.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS CABILDOS

a) Aspectos generales.

Los cabildos canarios en conjunto tuvieron en 1990 el presupuesto inicial agregado siguiente:

	Importe
Ingresos presupuesto	63.298
Gastos presupuesto	63.273
Diferencia	25
+ Resultas	8.900
Superávit	8.925

El superávit obtenido es superior en 6.027 millones de pesetas al de 1989, lo que representa un incremento del 208 %, debido a la evolución de las resultas entre ejercicios, tal como se desprende del cuadro siguiente:

	1989	1990	Variación
Resultas de ingresos	26.217	37.159	42 %
Resultas de gastos	23.318	28.259	21 %
Diferencia	2.899	8.900	208 %

en el que se observa el importante crecimiento experimentado por las resultas de ingresos entre ejercicios y el más moderado de las resultas de gastos y que aportan prácticamente la totalidad del superávit del presupuesto refundido.

En el origen de este hecho se encuentra el componente que entre las resultas de ingresos representan los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación y que se van engrosando ejercicio tras ejercicio, originando en consecuencia un cierto crecimiento de las obligaciones pendientes de pago.

En cuanto a las modificaciones de crédito, éstas supusieron una elevación del presupuesto inicial refundido de gastos en un 12 %, siendo su distribución, entre ejercicios corriente y cerrados, la siguiente:

	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto definitivo
Resultas de ingresos	37.159	---	37.159
Ingresos ej. corriente	63.298	5.087	68.385
Total ingresos	100.457	5.087	105.544
Resultas de gastos	28.259	182	28.441
Gastos ej. corriente	63.273	10.760	74.033
Total gastos	91.532	10.942	102.474
Diferencia	8.925	(5.855)	3.070

en el que se observa que el estado de gastos se ha incrementado en 10.942 millones de pesetas, en tanto que el de ingresos únicamente lo ha sido en 5.087 millones de pesetas, aunque es necesario tener en cuenta que en no todos los cabildos se han contabilizado los menores o mayores ingresos que financiaban las modificaciones del estado de gastos, por lo que el recurso al remanente de tesorería para la financiación de modificaciones ha sido inferior a los 5.855 millones de pesetas que parecen desprenderse de la liquidación.

Las modificaciones en el estado de gastos se han producido fundamentalmente en las operaciones de capital, que representan un 88 % del total, correspondiendo a las inversiones reales el 63 % de las mismas.

En cuanto a los ingresos, el grado de ejecución presupuestaria ha sido elevado en el ejercicio aunque en porcentajes inferiores a los del ejercicio anterior, pues se ha pasado de un 99 % en el ejercicio 1989 a un 87 % en el de 1990, correspondiendo los menores grados a las transferencias corrientes y de capital, que han rondado el 80 %, y sobre todo a la variación de pasivos financieros, con el 68 %.

En cuanto a los gastos, el grado de ejecución ha sido elevado en el ejercicio encontrándose en el mismo parámetro del ejercicio anterior, el 86 %, correspondiendo, al igual que en el ejercicio 1989, el menor grado a las inversiones reales, con un 76 %.

b) Ingresos.

Los ingresos corrientes (capítulos I a V) representan el 76 % del total de recursos generados en el ejercicio, correspondiendo a los de gestión propia (capítulos I y III) únicamente el 13 %, debido a su escaso peso en relación con las transferencias corrientes (capítulo IV) que suponen el 84 % de los ingresos corrientes y que tienen su contrapeso en las transferencias corrientes del estado de gastos, como consecuencia de la distribución entre los ayuntamientos de las Islas respectivas de la participación de las mismas en los ingresos procedentes del Régimen Económico y Fiscal. Observándose, en relación con el ejercicio 1989, una disminución del 14 % en las transferencias corrientes, en tanto que las tasas y otros ingresos se reducen en un 56 % debido a la constitución por el Cabildo de Tenerife del Organismo Autónomo de Hospitales Insulares, lo que supuso la desaparición de los ingresos procedente de los Hospitales de la liquidación del Cabildo y su aparición en el Organismo Autónomo.

Por último, los ingresos patrimoniales representan un importe reducido, el 3 % de los ingresos corrientes.

Los recursos contraídos por operaciones de capital propiamente dichas (capítulos VI y VII) suponen el 8 % del total de recursos generados en el ejercicio, correspondiendo un 96 % de los mismos a las transferencias de capital.

Con relación al ejercicio anterior se observa un crecimiento del 35 % en las transferencias de capital. Las operaciones financieras (capítulos VIII y IX) representan el 16 % de la totalidad de recursos generados en el ejercicio, correspondiendo la casi totalidad de los mismos a pasivos financieros, que suponen el 98 % de los recursos correspondientes a este apartado, en el que se encuentran incluidos tanto las operaciones de crédito a medio y largo plazo, como las operaciones de tesorería, con una disminución del 3 % con relación a 1989.

En cuanto al grado de realización de los ingresos, éste se encuentra en parámetros similares a los de 1989, con la siguiente distribución, teniendo en cuenta las resultas:

	Derechos liquidados	Cobros líquidos	Grado de realización
Resultas de ingresos	36.353	23.707	65 %
Ingresos del ejercicio	55.483	39.204	71 %
Total ingresos	91.836	62.911	69 %

en el que se observa que la realización se sitúa en un porcentaje del 69 %, con una distribución bastante homogénea entre resultas y corriente.

En cuanto a los ingresos de gestión propia (capítulos I y III), su realización se sitúa en el 72 %, en tanto que en las transferencias corrientes la recaudación está en el 89 %.

c) Gastos.

Los gastos realizados en el ejercicio se mantienen al nivel de 1989.

De ellos, los gastos corrientes (capítulos I a IV) suponen el 62 %, representando los gastos por transferencias los más importantes, con un 48 % de los mismos, seguidos de los de personal con un 28 %. Con porcentajes inferiores se encuentran los gastos de funcionamiento y los intereses de la deuda, con un 16 % y un 8 %, respectivamente.

Destaca la reducción del peso relativo de los gastos corrientes (del 70 % al 62 %) debido, principalmente, a la reducción, en un 30 %, de los gastos de personal y de los gastos de funcionamiento en un 27 %, aproximadamente.

Los gastos de capital propiamente dichos (capítulos VI y VII) suponen el 30 % de los gastos realizados en el ejercicio, de los cuales las inversiones reales representan el 87 %, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 32 %.

Los gastos por operaciones financieras (capítulos VIII y IX) suponen el 8 %, aproximadamente, del total de gastos del ejercicio, de los cuales la amortización de la deuda representa el 77 %. Ambos capítulos mantienen unos importes similares a los de 1989.

En cuanto a la realización de los gastos, éstos se encuentran en parámetros similares a los del ejercicio anterior, con la siguiente distribución, incluyendo resultas:

	Obligaciones liquidadas	Pagos líquidos	Grado de realización
Resultas de gastos	26.849	15.144	56 %
Gastos del ejercicio	61.678	44.531	72 %
Total gastos	88.527	59.675	67 %

en el que se observa una desproporción entre resultas y corriente, encontrándose el primero de ellos en un 56 %, lo que podría conllevar, en ocasiones, una acumulación de acreedores que han de esperar periodos cada vez mayores para el cobro. El mayor grado de realización corresponde a los intereses de la deuda financiera, con un 98 %, seguido de los gastos de personal y la variación de activos financieros con el 96 %. Situándose en el lugar opuesto las inversiones reales, con un 33 %, obedeciendo esta última circunstancia a varios factores entre los que cabe citar, al igual que en el resto de corporaciones, el que las adjudicaciones se efectúan ya avanzado el segundo semestre del año, de tal modo que se dejan contraídos importes para los que la inversión no está aún realizada, o incluso la existencia de expedientes de gasto en los que la adjudicación definitiva no se ha efectuado a 31 de diciembre y en los que, no obstante, los importes correspondientes se dejan contraídos para evitar la incorporación de remanentes.

d) Resultados del ejercicio.

Las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio corriente (capítulos I a IX) arrojan los siguientes resultados:

Composición superávit o déficit

	Por operaciones corrientes	Por operaciones de capital	Por operaciones financieras	Superávit (Déficit) Total	% relación con derechos liquidados
Agregado Cabildos	3.699	(14.521)	4.386	(6.196)	11,71
Cabildo de Gran Canarias	1.032	(5.796)	3.812	(682)	2,88
Cabildo de Tenerife	1.095	(4.894)	205	(3.594)	18,63
Cabildo de La Palma	166	(1.031)	388	(477)	14,08
Cabildo de Lanzarote	242	(1.053)	(109)	(920)	22,07
Cabildo de Fuerteventura	438	(778)	47	(293)	13,31
Cabildo de la Gomera	338	(526)	22	(166)	13,69
Cabildo de El Hierro	88	(171)	20	(63)	4,22

en el que se observa que en la totalidad de cabildos se liquidan con déficit las operaciones del ejercicio corriente, correspondiendo el mayor importe al de Tenerife, aunque en valores relativos es el de Lanzarote el que presenta un mayor déficit, situándose en el extremo contrario el de Gran Canaria.

Además del importe elevado que representa en la mayoría de los casos, en cuanto a la composición de dichos déficits se observa que en todos ellos se liquidan con déficit las operaciones de capital, en tanto que lo son con superávit los correspondientes a las operaciones corrientes y financieras, salvo en el de Lanzarote, en que en el ejercicio 1990 el endeudamiento neto fue negativo como consecuencia de la no concertación de ninguna operación de crédito, debiendo observarse la extraordinaria importancia de dichas operaciones a la hora de hacer disminuir el déficit de capital, circunstancia que relativiza lo expuesto en el párrafo anterior.

3.2.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

a) Aspectos Generales.

Los ayuntamientos canarios en conjunto tuvieron en 1990 el presupuesto inicial agregado siguiente:

	Importe
Ingresos presupuesto	105.423
Gastos presupuesto	104.900
Diferencia	523
+ Resultas	13.707
Superávit	14.230

Dicho superávit es superior en 4.067 millones de pesetas al de 1989, lo que representa un incremento del 40 %, debido a la evolución de las resultas entre ejercicios, tal como se desprende del cuadro siguiente:

	1989	1990	Variación
Resultas de ingresos	43.209	64.789	50 %
Resultas de gastos	33.118	51.082	54 %
Diferencia	10.091	13.707	36 %

en el que se observa el fuerte crecimiento experimentado entre ejercicios tanto de las resultas de ingresos como de gastos, con una aportación al superávit del presupuesto refundido que ha crecido en el 36 %.

El origen de este hecho se encuentra en el fuerte componente que entre las resultas de ingresos representan los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, que año tras año se van engrosando como consecuencia de la no tramitación de los oportunos expedientes de depuración, de tal modo que una parte significativa de los mismos (aunque no estimada por las propias corporaciones) se encuentran prescritos, resultan insolventes los deudores o las liquidaciones presentan importantes defectos. La incobrabilidad de dichos derechos origina el que la ausencia de financiación conlleve el crecimiento de las obligaciones pendientes de pago, que en su casi integridad obedecen a deudas reales debidamente reconocidas y liquidadas.

En cuanto a las modificaciones de crédito, éstas supusieron una elevación del presupuesto inicial refundido de gastos en un 15 %, siendo su distribución entre ejercicios corriente y cerrados la siguiente:

	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo
Resultas de ingresos	64.789	(131)	64.658
Ingresos ejercicio corriente	105.423	16.254	121.677
Total Ingresos	170.212	16.123	186.335
Resultas de Gastos	51.082	(355)	50.727
Gastos ejercicio corriente	104.900	24.052	128.952
Total Gastos	155.982	23.697	179.679
Diferencia	14.230	(7.574)	6.656

en el que se observa que el estado de gastos se ha incrementado en 23.697 millones de pesetas, en tanto que el de ingresos únicamente lo ha sido en 16.123 millones de pesetas, aunque es necesario tener en cuenta que en no todos los ayuntamientos se han contabilizado los nuevos o mayores ingresos que financiaban las modificaciones del estado de gastos, hecho necesario para mantener el equilibrio contable, por lo que el recurso al remanente de tesorería para la financiación de modificaciones ha sido inferior a los 7.574 millones de pesetas que parecen desprenderse de la liquidación.

Dichas modificaciones en el estado de gastos se han producido fundamentalmente en las operaciones de capital, que representan un 87 % del total, correspondiendo a la variación de pasivos financieros el 63 % de los mismos, de los que una gran parte corresponde a las operaciones de tesorería, que en ocasiones representan una financiación a largo plazo como consecuencia del hecho de que al vencimiento de una se concierta automáticamente otra.

Un aspecto a destacar es la escasez de ahorro bruto generado por los ayuntamientos canarios y que ha pasado de 11.897 millones de pesetas en el ejercicio 1989 a 7.302 millones de pesetas en 1990, lo que ha hecho recaer en el endeudamiento la financiación de las operaciones de capital, siendo causa importantísima de las dificultades financieras por las que atraviesan las entidades locales canarias.

El grado de ejecución presupuestaria ha sido elevado en el ejercicio, con parámetros similares a los del ejercicio anterior, superando el 90 % tanto en ingresos como en gastos.

b) Ingresos.

Los ingresos corrientes (capítulos I a V) representan un 66 % del total de recursos generados en el ejercicio, correspondiendo a los de gestión propia (capítulos I a III) el 62 % de los mismos, observándose con respecto al ejercicio 1989 un crecimiento de los impuestos directos del 16 %, en tanto que en las tasas y otros ingresos se produce una disminución del 21 %, pudiendo obedecer dicha circunstancia a la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas reguladoras de tasas y precios públicos como consecuencia de la Ley 39/88.

Las transferencias corrientes, básicamente Fondo Nacional de Cooperación Municipal y recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal, representan el 35 % de los ingresos corrientes, con un ligero aumento en relación con el ejercicio 1989.

Por último, los ingresos patrimoniales representan un importe reducido, el 3 % de los ingresos corrientes.

Los recursos contraídos por operaciones de capital propiamente dichos (capítulos VI y VII) suponen el 6 % del total de recursos generados en el ejercicio, correspondiendo un 94 % de los mismos a las transferencias de capital.

Con relación al ejercicio anterior se observa una fuerte caída, del 83 %, de los ingresos por enajenación de inversiones, compensada por un crecimiento del 45 % en las transferencias de capital.

Las operaciones financieras (capítulos VIII y IX) representan el 29 % de la totalidad de recursos generados en el ejercicio, correspondiendo la casi totalidad de las mismas a los pasivos financieros, que suponen el 99 % de los recursos correspondientes a este apartado, en el que se encuentran incluidos tanto las operaciones de crédito a medio y largo plazo, como las operaciones de tesorería, con un crecimiento del 71 % con relación a 1989, lo que pone de manifiesto lo ya expuesto sobre la necesidad creciente de los ayuntamientos de acudir a financiación externa, así como el lógico y paralelo crecimiento de la carga financiera derivada de dichas operaciones.

En cuanto el grado de realización, éste se encuentra en parámetros similares a los de 1989, con la siguiente distribución:

	Derechos liquidados	Cobros líquidos	Grado realización
Resultas de ingresos	63.779	24.482	38 %
Ingresos del ejercicio	113.947	77.916	68 %
Total ingresos	177.726	102.398	58 %

en el que se observa en relación con los ingresos lo ya comentado sobre la inviabilidad de cobro de una gran parte de los figurados en resultas, de tal modo que su realización se sitúa en un porcentaje del 38 % que hay que considerar muy reducido, pues hay que tener en cuenta, además, que 5.340 millones de pesetas que figuran como cobrados en la liquidación corresponden a existencias en metálico a 1 de enero. En cuanto al resto de los capítulos, su realización se sitúa en el 68 %, que ha de considerarse, asimismo, como muy reducido.

En cuanto a los ingresos que componen la gestión tributaria propia (capítulos I, II y III), su realización se sitúa en el 60 %, en tanto que en las transferencias corrientes la recaudación supera el 90 %.

c) Gastos.

Los gastos corrientes (capítulos I a IV) suponen el 57 % del total de gastos realizados en el ejercicio, suponiendo los de personal un 45 % de los mismos, seguidos de los de funcionamiento con el 37 %, encontrándose los intereses de la deuda y las transferencias corrientes en porcentajes más alejados con el 8 % y 9 %, respectivamente. Parámetros muy similares a los del ejercicio anterior.

Los gastos de capital propiamente dichos (capítulos VI y VII) suponen el 27 % de los gastos realizados en el ejercicio, suponiendo las inversiones reales el 98 % del total, con un incremento del 11 % en relación con el ejercicio 1989.

Los gastos por operaciones financieras (capítulos VIII y IX) suponen el 16 % del total contraído en el ejercicio.

De estos gastos financieros, el porcentaje mayor corresponde a la amortización de la deuda, que alcanza el 97 % del total, con un incremento en relación al ejercicio anterior del 82 % que obedece a la necesidad de los ayuntamientos de acudir a la financiación externa, y durante el ejercicio 1990 sobre todo a operaciones de tesorería.

	Obligaciones liquidadas	Pagos líquidos	Grado realización
Resultas de gastos	50.210	25.001	50 %
Gastos del ejercicio	115.440	71.450	62 %
Total gastos	165.650	96.451	58 %

En cuanto a la realización de los gastos, éstos guardan una mayor proporción entre resultas y corrientes que los ingresos, aunque las resultas únicamente se sitúan en el 50 %, lo que podría conllevar una acumulación de acreedores que han de esperar períodos cada vez mayores para el cobro, con el coste añadido que ello supone en cuanto al sobreprecio que los proveedores establecen en sus ofertas por el tiempo de espera y los intereses de demora que se devenguen en su caso.

El mayor grado de realización corresponde a los gastos de personal con un 96 %, seguido de los activos financieros con un 92 %, aunque el valor absoluto es muy reducido, situándose en el lugar opuesto las inversiones reales con un 34 %.

Esta última circunstancia obedece a varios hechos, entre los que cabe citar el que las adjudicaciones se efectúen ya avanzado el segundo semestre del año, de tal modo que se dejan contraídos importes para los que la inversión aún no está realizada, o incluso la existencia de expedientes de gasto en los que la adjudicación definitiva no se ha efectuado a 31 de diciembre y en los que, no obstante, los importes correspondientes se dejan contraídos para evitar la incorporación de remanentes, sin despreciar tampoco las dificultades crecientes de las corporaciones canarias para atender los pagos, derivadas de las dificultades del resto de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y del Estado para atender a su vez los pagos por transferencias de capital a los ayuntamientos y que en el ejercicio 1990 se encontraban pendientes de cobro por estos últimos en un 47 %, con un importe global de 3.589 millones de pesetas.

Por último, indicar que los bajos niveles de realización de los gastos son consecuencia obligada de los importes que al final del ejercicio se encuentran pendientes de cobro, tal como se desprende en el cuadro siguiente:

	1989	1990	Variación
Pendiente de cobro	59.724	75.328	26 %
Recaudación líquida	81.533	102.399	26 %
Pendiente de pago	51.153	69.199	35 %
Pagos líquidos	76.192	96.451	27 %

en el que se observa que si bien el crecimiento de los índices entre ejercicios se encuentra alrededor del 25 % el pendiente de pago ha crecido en un 35 %, siendo las existencias de tesorería a 31 de diciembre de ambos ejercicios similares.

d) Resultados del ejercicio.

Las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio corriente (capítulos I a IX) arrojan los siguientes resultados:

COMPOSICION SUPERAVIT (O DEFICIT)

Superávit / Déficit en relación a derechos	Por Operaciones corrientes	Por Operaciones de capital	Por Operaciones financieras	Total	Por (Déficit) con liquidados
Agregado Ayuntamientos	7.688	(23.980)	14.599	(1.693)	1'31
Ayuntamientos de menos de 5.000 hab.	112	(1.101)	125	(864)	18'35
" entre 5.000 y 20.000 hab.	1.683	(7.031)	5.117	(230)	0'76
" entre 20.000 y 50.000 hab.	1.983	(6.551)	4.272	(296)	1'04
" mayores de 50.000 hab.	4.109	(9.296)	5.085	(102)	0'21

en el que se observa que en la totalidad de los estratos se liquida con déficit las operaciones del ejercicio corriente, correspondiendo el mayor importe, tanto absoluto como relativo, a los del grupo D, pues el mismo representa el 18'3 % de los derechos liquidados en el ejercicio.

En cuanto a la composición de dichos déficits se observa que en los cuatro grupos se liquidan con déficit las operaciones de capital, en tanto que lo son con superávit los correspondientes a las operaciones corrientes y financieras, pudiendo comprobarse la extraordinaria importancia de estas últimas a la hora de hacer disminuir el déficit de capital.

En relación con lo anterior es necesario tener en cuenta que los resultados presupuestarios han sido tomados directamente de las liquidaciones, sin tener en cuenta los posibles ajustes presupuestarios derivados de las desviaciones en gastos con financiación afectada, ajustes éstos que a pesar de haber sido solicitados no fueron efectuados por los Ayuntamientos.

La incorporación de las resultas de ejercicios cerrados modifican los resultados de las liquidaciones de los presupuestos refundidos, salvo en los del grupo D, si bien hay que tener en cuenta lo ya expuesto sobre la inviabilidad de cobro de muchos de los valores que figuran pendientes de ingresar y que muy posiblemente en caso de haber sido objeto de depuración habrían conducido también a déficits en los presupuestos refundidos.

Incorporando, tal como se ha expuesto, las resultas sin previa depuración y sin ajustes algunos, el resultado presupuestario quedaría de la siguiente manera:

	Superávit o Déficit	% sobre derechos liquidados
Agregado Ayuntamientos	12.076	6'8
Ayuntamientos de menos de 5.000 hab.	(345)	3'6
Ayuntamientos entre 5.000 y 20.000 hab.	4.872	10'5
Ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 hab.	3.320	7'8
Ayuntamientos mayores de 50.000 hab.	4.229	5'3

4.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES

El artículo 145.2 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, clasifica los organismos autónomos dependientes de las entidades locales, a efectos de su régimen presupuestario y contable, de la forma siguiente:

- Organismos autónomos de carácter administrativo.
- Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.

El régimen presupuestario y contable de los organismos autónomos del primer tipo es el mismo que el de las entidades locales de los que dependen y son, por tanto, estos organismos los que serán objeto del presente apartado.

No obstante, hay que destacar que no se ha creado en Canarias ningún organismo autónomo local de algún tipo diferente al administrativo.

Según la información obrante en la Audiencia de Cuentas, del ejercicio económico de 1990, existen en Canarias 56 organismos autónomos locales, distribuidos en 21 corporaciones (4 cabildos y 17 ayuntamientos).

Los 47 organismos autónomos locales de los que se tiene información tuvieron en 1990 el presupuesto inicial agregado siguiente (en millones de pesetas):

	Importes
Ingresos presupuesto	14.248,2
Gastos presupuesto	14.246,7
Diferencia	1,5
+ Resultas	257,7
Superávit	259,2

en el que se observa un superávit inicial de 259 millones de pesetas que procede casi en su totalidad de las resultas de ejercicios anteriores.

Teniendo en cuenta las modificaciones de crédito habidas durante el ejercicio, obtenemos el siguiente presupuesto definitivo:

	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto definitivo
Total ingresos	14.712,3	1.098,4	15.810,7
Total gastos	14.453,1	1.233,5	15.686,6
Diferencia	259,2	(135,1)	124,1

del que se deduce que los organismos autónomos locales canarios tuvieron un presupuesto definitivo agregado de 15.810 millones de pesetas en ingresos y de 15.686 millones de pesetas en gastos, lo que supone un superávit presupuestario definitivo de 124 millones de pesetas.

De este presupuesto total, la mayor parte corresponde al Organismo Autónomo Hospitales del Cabildo de Tenerife, que concentra el 79 % del mismo con 12.411 millones de pesetas de ingresos y de gastos.

De los 46 organismos autónomos restantes, sólo 10 de ellos superan los 100 millones de pesetas de presupuesto, destacando un elevado número de ellos con escaso presupuesto (20 no superan los 25 millones de pesetas y 14 no alcanzan los 10 millones de pesetas).

5.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1.- AMBITO, OBJETIVOS Y RESULTADOS

El artículo 5.1.d) de la ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo, establece entre las funciones que le corresponden a la Audiencia de Cuentas de Canarias la de fiscalizar los contratos suscritos por las entidades locales que forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma.

Para la selección de los contratos analizados se procedió a la petición, entre la documentación solicitada en relación con el ejercicio 1990, de la relación de contratos formalizados en dicho ejercicio por todas y cada una de las entidades que integran el sector local canario. De estas relaciones y de acuerdo con los planes de trabajo, se dió preferencia en el examen a los contratos celebrados por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y cabildos, aunque no pudieron entrar en dicha selección, por no haber remitido en su momento las relaciones de contratos, los correspondientes a:

CABILDO DE FUERTEVENTURA
CABILDO DE LA GOMERA
AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
" DEL PUERTO DE LA CRUZ
" DE ARONA
" DE INGENIO

El total de contratos cuya celebración se ha notificado es de 2.044, por un importe de 32.755 millones de pesetas, de los que se han examinado y analizado 67 expedientes contractuales, por un importe de 8.914 millones de pesetas. No han sido remitidos, a pesar de haber sido reiterados expresamente, 3 expedientes contractuales, por importe de 209 millones de pesetas y cuya relación figura en los anexos.

El examen y comprobación de los contratos relacionados se ha extendido a la información del grado de cumplimiento de la legalidad y de la regularidad de los mismos y se ha concretado en el análisis de las fases de los expedientes contractuales de preparación, redacción, adjudicación y formalización, así como también las relativas a la ejecución y recepción del objeto del contrato y, en su caso, a las otras formas de terminación de la relación obligacional.

La normativa aplicable a esta actuación contractual se desarrolla básicamente en las siguientes normas:

- Ley de Bases de Régimen Local (L.B.R.L.).
- Texto Refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (R.D.L. 781/86).
- Ley y Reglamento de Contratos del Estado (L.C.E. y R.G.C.E.).

Dos aspectos son de destacar: uno referido a la importancia de las obras públicas como objeto de los contratos y otro la inclinación por la contratación directa como forma de selección de los contratistas.

Respecto a la contratación directa, debe llamarse la atención sobre la necesidad de reducir a sus justos límites esta forma, siempre excepcional, de adjudicación, mediante la interpretación restrictiva de los supuestos de procedencia, ya que junto a las ventajas de rapidez y flexibilidad encierra el grave inconveniente de limitar la concurrencia y dado que una gran parte del gasto municipal se realiza a través de los contratos administrativos, se debe garantizar al máximo la objetividad, transparencia y eficacia.

Igualmente debe destacarse la reducida amplitud con la que en este sistema se promueve normalmente la concurrencia en la oferta, en los que suelen limitarse al mínimo legal de las tres consultas a los empresarios que se estimen capacitados. Número que en ocasiones resulta menor en la práctica, ya porque algunas de las empresas consultadas no contestan o declinan la invitación, porque la publicidad de la licitación se efectúa por medio de la prensa y solamente acceden una o dos empresas, o incluso en algún caso formulan proposiciones por encima del presupuesto.

Asimismo, se observa la falta, en ocasiones, de la documentación de las gestiones realizadas en dicha promoción de concurrencia, así como de la justificación de las razones de haberse dirigido hacia determinadas empresas y de la forma en la que se aseguró el secreto e integridad de las ofertas recibidas, aspectos que en la subasta y el concurso se encuentran minuciosamente regulados.

Por lo que se refiere a las adjudicaciones directas por razones de urgencia, que constituyen un supuesto frecuente de utilización en este sistema excepcional, debe recomendarse un uso restringido de estos casos, ya que la forma de adjudicación no guarda excesiva relación con la pronta resolución del objeto del contrato. La rapidez debe buscarse en la elaboración del proyecto y en la tramitación del expediente y sobre todo en la celeridad de ejecución.

Del resultado del examen que se ha realizado de los expedientes contractuales seleccionados, es preciso reseñar con carácter previo, y antes de entrar en el análisis pormenorizado de las clases de contratos, dos aspectos: uno en orden al control interno y el otro relativo a la consecución de los resultados pretendidos.

En relación al primero, las normas generales de la contratación pública y las específicas del régimen local establecen los dictámenes preceptivos y previos de los servicios jurídicos y de la intervención en orden a la comprobación de la voluntad del órgano contractual en relación con acuerdos tan importantes como son los de aprobación de los pliegos de condiciones. En este sentido, es de señalar que las corporaciones locales canarias no han sido rigurosas en su cumplimiento y exigencia, pues si el primero no figura en gran número de expedientes, el segundo es prácticamente inexistente.

Con referencia a la consecución de los objetivos pretendidos es de señalar que la tónica general es la del cumplimiento de las obligaciones concertadas, aunque resulta habitual el incumplimiento de los plazos de ejecución y entrega, de ahí que

la importancia de disponer, en la fecha preestablecida, de los objetos figurados en los contratos justifique la rigurosa atención que debe prestarse a la determinación del tiempo de realización de la obra, prestación de los servicios o entrega de los suministros, la cual debe estar expresa e indubitablemente señalada en los pliegos de bases, en los programas correspondientes y en los documentos adecuados de formalización contractual.

5.2.- COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN

Este importante aspecto del contrato, que en muchos casos puede ser vital para su validez, pues no hemos de olvidar que el contrato otorgado por órgano manifiestamente incompetente puede dar lugar a que el mismo sea declarado nulo de pleno derecho, ha sido objeto de análisis con el siguiente resultado:

- En 8 casos actúa como órgano de contratación la Comisión de Gobierno.
- En 30 casos ejerce dicha competencia la Presidencia.
- En 13 casos dicha función es ejercida por el Pleno.
- En 4 casos se observa que la competencia se ejerce de forma indistinta por la Presidencia y la Comisión de Gobierno.
- En 2 casos la competencia se ejerce de forma indistinta por la Comisión de Gobierno y el Pleno.
- En 3 casos se observa que la competencia la ejerce de forma indistinta el Pleno y la Presidencia.

La competencia en materia de contratación se atribuye por el artículo 21.1 de la Ley de Bases de Régimen Local a la Presidencia, si bien con ciertos límites. Sin embargo, las competencias de la Presidencia en este orden se ven ampliadas por el artículo 24.c) del R.D.L. 781/86 a aquellos contratos que no tengan una duración superior a un año y no exigen créditos superiores al consignado en el presupuesto anual.

En los contratos examinados en que ha actuado la Comisión de Gobierno lo ha sido ejerciendo competencias delegadas, bien por la Presidencia, bien por el Pleno, habida cuenta de que, si bien no está previsto que este órgano ostente esta competencia, los artículos 43 y 51 del Reglamento de Organización y Funcionamiento para los ayuntamientos y 63 y 71 para los cabildos, establecen la posibilidad de que tanto el Pleno como la Presidencia puedan delegar en la Comisión de Gobierno ciertas competencias, entre las que figuran las de contratación.

En cuanto a los contratos en que se observa la actuación conjunta como órganos de contratación del Pleno y la Presidencia, son un supuesto de incompetencia por parte de alguno de ellos, por estar definidos en la legislación de contratos de forma excluyente la competencia de uno y otra.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Cantabria, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.	2	2	--
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes.	14	12	2
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.	86	2	12

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, dado su carácter uniprovincial, no existe Diputación Provincial, por lo que en el cuadro anterior no se incluye el Grupo A).

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye 16 municipios y reúne un total de 369.359 habitantes.

De ellos destaca Santander, capital de la Comunidad Autónoma, con una población de 194.221 habitantes, el 53 % del grupo, y un presupuesto de 14.737 millones de pesetas (58 % del total).

Los ingresos por operaciones corrientes previstos suponen el 70 % de los ingresos totales, los de operaciones financieras, el 19 %, y los de capital, un 11 %.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes ascienden al 59 % de los gastos totales, al 38 % los previstos para operaciones de capital y un 3 % para los financieros, destinados a la amortización de los préstamos pendientes, esencialmente. Las resultas de ejercicios cerrados suponen, en ingresos, un 21 % de los ingresos totales del presupuesto refundido y, en gastos, un 15 %, cuantías que parecen aceptables.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 4.063 millones de pesetas, que suponen el 13 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones asciende a un 16 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a pasivos financieros, por el 45 %, a inversiones reales, por un 34 %, y a la compra de bienes y servicios, por un 15 %.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El contraído de los derechos por operaciones corrientes asciende al 73 % de los totales, correspondiendo un 2 % a los procedentes de operaciones de capital y un 25 % a los de operaciones financieras.

El contraído de las obligaciones por operaciones corrientes suponen el 62 % del total, destinándose el 25 % a operaciones de capital y el 13 % restante a las financieras, esencialmente para amortizar los préstamos pendientes.

Destaca el Ayuntamiento de Peñarrubia, en el que los ingresos corrientes ascienden al 100 % de los ingresos totales y los gastos por operaciones corrientes suponen el 90 % de los gastos totales.

d) Resultados de la liquidación del presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos registran un superávit de 2.184 millones de pesetas. Este superávit se produce como consecuencia del de operaciones corrientes y préstamos concertados, así como por el efecto positivo de las resultas de ejercicios cerrados. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	1.846 millones de pts.
- Por ejercicio corriente	338 millones de pts.
Suma (superávit)	2.184 millones de pts.

e) Indicadores significativos

- La formación bruta de capital ha sido de 5.944 millones de pesetas, lo que ha supuesto el 20 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 200 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, han representado el 22 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido positiva (incremento) en 12 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros ha sido positiva, con 3.122 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta en los dos Ayuntamientos incluidos en el grupo y ha sido debidamente aprobada por el Pleno de la Corporación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Los 12 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 11 casos, no constando su aprobación en el Ayuntamiento de Suances.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Los dos Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en todos los Ayuntamientos incluidos en este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

De los 12 Ayuntamientos que forman este grupo, han rendido esta cuenta 11, quedando pendiente Santoña.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, excepto 4: Corrales, Reocín, Suances y Medio Cudeyo.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Municipios con población superior a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno por los dos Ayuntamientos que forman el grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran este grupo, con la excepción de Suances. Asimismo, ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos contemplados.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este colectivo han rendido esta cuenta, que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, excepto los Ayuntamientos de Suances y Corrales de Buelna, pero no consta haya sido aprobada en los tres siguientes: Santoña, Marina de Cudeyo y Colindres.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. Se ha aprobado el presupuesto con un déficit inicial de 85 millones de pesetas en el Ayuntamiento de Camargo.

3.2.2. Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el artículo 452 del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una constante en la legislación de las Haciendas Locales y se ha confirmado en el artículo 146 de la Ley 39/1988, reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en el Ayuntamiento de Santoña.

3.2.3. Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalía es, con diferencia, la más frecuente en esta Comunidad, ya que se encuentra en 5 de las 19 cuentas examinadas (36 % del total): Torrelavega, Camargo, Reinosa, Cabezón de la Sal, Corrales de Buelna.

3.2.4. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deberían comprobar la posible existencia de valores prescritos y proceder a su baja en las cuentas.

Se encuentra en esta situación la Corporación de Piélagos.

3.2.5. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, provocando desajustes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Esta anomalía se observa en 5 de las Cuentas examinadas (36 % del total), Torrelavega, Camargo, Reinosa, Cabezón de la Sal y Colindres.

3.2.6. Carencia de información sobre la recaudación, bien por no rendir cuentas los Recaudadores de la Corporación o los Servicios de Recaudación que prestan éste a los Ayuntamientos.

Esta irregularidad se observa en un Ayuntamiento, en periodo voluntario.

3.2.7. No coinciden los saldos finales del activo y del pasivo de la Cuenta de Administración de Patrimonio en 1989 con los iniciales de la de 1990 en tres Ayuntamientos: Camargo, Colindres y Suances.

3.2.8. En la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto se formalizan operaciones que tienen la consideración de presupuestarias en Torrelavega, Santa María de Cayón, Cabezón de la Sal, Santoña, Colindres, Reinosa.

3.2.9. Junto al acta de arqueo al 31 de diciembre de 1990, no se han aportado las notas o extractos de conciliación de los Bancos, en dos Ayuntamientos, Suances y Corrales de Buelna.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo A: Diputaciones	5	5	
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.	6	6	
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes.	56	42	14
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.	853	49	244

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales de los mismos, formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye las cinco Diputaciones Provinciales y 97 municipios, que reúnen una población total de 970.461 habitantes.

Los ingresos previstos por transferencias corrientes supusieron el 38 % del total y la variación de pasivos financieros el 16 %, correspondiendo el restante 45 % a impuestos directos (el 15 %), a tasas (el 14 %), a transferencias de capital (el 7 %) y a los demás capítulos (el 9 %).

En cuanto a los gastos, las retribuciones de personal fueron el 29 % del total y las inversiones reales el 25 %, correspondiendo el restante 45 % a compras de bienes y servicios (el 17 %), intereses (el 8 %), transferencias corrientes (el 6 %), amortizaciones (el 6 %) y a los demás capítulos (el 8 %).

Las resultas de ejercicios cerrados supusieron el 30 % del presupuesto refundido en el ejercicio, en ingresos, y el 28 %, en gastos.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 28.300 millones de pesetas que supusieron el 24 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones ascendió a un 33 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias se consideran elevadas.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a pasivos financieros, por el 42 %, a inversiones , en un 22 %, y a variación de activos financieros, en un 22 %.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El contraído de los derechos por operaciones corrientes ascendió al 59 % de los totales, correspondiendo un 7 % a los procedentes de operaciones de capital y un 34 % a los de operaciones financieras.

El contraído de las obligaciones por operaciones corrientes supusieron el 51 % del total, destinándose el 24 % a operaciones de capital y el 25 % restante a las financieras, para amortizar los préstamos pendientes (el 16 %) y para variación de activos financieros (el 9 %).

d) Resultados de la liquidación del presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos tienen un superávit de 4.935 millones de pesetas. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	2.113 millones de pts.
- Por ejercicio corriente	2.822 millones de pts.
Suma (superávit)	4.935 millones de pts.

e) Indicadores significativos.

- La formación bruta de capital ha sido de 18.899 millones, lo que supone el 14 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 2.407 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, representaron el 38 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido negativa (desinversión) en 505 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros positiva (aumento del endeudamiento), con 9.517 millones de pesetas

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Las Diputaciones Provinciales no tienen anomalías referentes a este punto de la Cuenta General del Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta en los seis Ayuntamientos incluidos en el grupo, la cual ha sido aprobada por el Pleno, excepto en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en el que no consta su aprobación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Los 42 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 32 casos, no constando su aprobación en los 10 restantes, que son Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Herencia, Malagón, Moral de Calatrava, Socuéllamos, Illescas, Ocaña y la Puebla de Montalbán.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Los 49 Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en 35 casos. No consta su aprobación en 14.

3.1.2.- Cuenta de Administracion de Patrimonio.

No ha enviado esta cuenta la Diputación de Albacete.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en tres de los Ayuntamientos incluidos en este grupo. No la han enviado los tres restantes, que son Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

De los 49 Ayuntamientos que forman este grupo han rendido esta cuenta 36, quedando 13 pendientes: Almansa, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Herencia, Malagón, Membrilla, Villanueva de los Infantes, San Clemente, Illescas, Los Yébenes, La Puebla de Montalbán y Villacañas.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, excepto en los Ayuntamientos de Caudete, Villarobledo y Moral de Calatrava.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Las 5 Diputaciones Provinciales han remitido esta cuenta y en todas ellas consta su aprobación.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de los seis Ayuntamientos que forman este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran el grupo, con la excepción de Socuéllamos. Asimismo ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos, excepto en 6: Caudete, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, Herencia, Malagón y La Puebla de Montalbán.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Las 5 Diputaciones Provinciales tienen remitida y aprobada esta cuenta.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este colectivo han rendido esta cuenta, que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, pero no consta hayan sido aprobadas en los cinco siguientes: Caudete , Alcázar de San Juan, Socuéllamos, Illescas y La Puebla de Montalbán

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. No coinciden los saldos finales a 31 de diciembre de 1989, con los iniciales a 1 de enero de 1990, en la agrupación de Resultas.

En cuanto a lo pendiente de cobro, en los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Ocaña y La Puebla de Montalbán y respecto a lo pendiente de pago, en el Ayuntamiento de Cuenca.

En los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, siete presentan discrepancias en el arrastre de la existencia en Caja, seis en lo pendiente de cobro y seis en lo pendiente de pago.

3.2.2. Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son mayores que los ingresos corrientes.

Esta anomalía se ha producido en las cuentas de cuatro Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes: La Herrera, Las Labores, Paredes de Melo y Rada de Haro.

3.2.3. Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el artículo 452 del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

Esta irregularidad se ha encontrado en seis Ayuntamientos: Ciudad Real, Almódovar del Campo, Calzada de Calatrava, Membrilla, Corral de Almaguer y Mora.

3.2.4. Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalía es, con diferencia, la más frecuente en esta Comunidad, ya que se encuentra en 29 de las 52 cuentas examinadas (el 56 % del total) de Corporaciones mayores de 5.000 habitantes.

3.2.5. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deberían comprobar la posible existencia de valores prescritos y darlos de baja en las cuentas.

Se da esta circunstancia en 13 Corporaciones mayores de 5.000 habitantes: Almansa, Tobarra, Argamasilla de Calatrava, Campo de Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Puertollano, Tomelloso, San Clemente, Sonseca, Talavera de la Reina, Torrijos y los Yébenes.

3.2.6. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, provocando desajustes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Esta anomalía se observa en 24 de las Cuentas examinadas (el 66 % del total) de Corporaciones mayores de 5.000 habitantes.

3.2.7. Carencia de información sobre la recaudación, por no rendir cuentas los Recaudadores de la Corporación o los Servicios de Recaudación, provinciales o autonómicos, que prestan este servicio a los Ayuntamientos.

Esta anomalía se observa en 8 Corporaciones, en periodo voluntario y ejecutivo, y en 3 Corporaciones más en periodo ejecutivo solamente.

El total supone el 20 % del colectivo examinado.

3.2.8. No ha sido informada la Cuenta General de Presupuesto por la Comisión Especial de Cuentas en 12 Ayuntamientos: Talavera de la Reina, Illescas, Ocaña, La Puebla de Montalbán, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Herencia, Malagón, Moral de Calatrava, Socuéllamos y San Clemente.

3.2.9. En las Cuentas de Administración de Patrimonio no coinciden los saldos finales del activo y del pasivo, en 1989, con los iniciales de 1990 en dos Ayuntamientos: Alcázar de San Juan y Ocaña.

3.2.10. Además de lo señalado en el punto 3.2.4., en tres Ayuntamientos: Toledo, Almansa y Hellín, se contabilizan operaciones que, por su naturaleza, debieran aplicarse al presupuesto ordinario y no, como se ha hecho, en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.

3.2.11. El acta de arqueo al 31 de diciembre de 1990 no ha podido ser conciliada con las notas o extractos de los Bancos en 6 Ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes: Villarrobledo, Calzada de Calatrava, Malagón, Socuéllamos, Mora y Ocaña.

Asimismo, esta anomalía aparece en 14 Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, que son: Garaballa, Las Valeras, Campisábalos, Checa, Cincovillas, Sacedón, Torre del Burgo, Cogolludo, El Casar, Pinilla de Jadraque, Ajofrín, Los Navalmorales, Mazarambroz y Villarejo de Montalbán. Esta deficiencia afecta al 28 % de los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo A: Diputaciones	9	9	-
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes	8	8	-
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes	41	35	6
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes	2.199	114	648

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye las nueve Diputaciones Provinciales y 157 municipios y reúne un total de 4.124.049 habitantes.

En cuanto a los ingresos, los previstos por transferencias corrientes ascienden al 37 % del total y los correspondientes a tasas y otros ingresos al 15 %, correspondiendo el 48 % restante a impuestos directos (el 15 %), transferencias de capital (el 13 %), variaciones de pasivos financieros (también el 13 %) y a los demás capítulos presupuestarios (el 7 %).

En cuanto a los gastos, las retribuciones de personal suponen el 32 % del total y las inversiones reales el 29 %, correspondiendo el 39 % restante a compra de bienes y servicios (el 19 %), intereses y amortizaciones (el 12 %) y a los demás capítulos presupuestarios (el 8 %).

Las resultas de ejercicios cerrados suponen el 33 % del presupuesto refundido, en cuanto a ingresos, y el 30 %, en cuanto a gastos.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 30.001 millones de pesetas, que suponen el 13 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones asciende a un 20 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a pasivos financieros, por el 36 %, a la compra de bienes y servicios, en un 8 %, a inversiones reales, en un 30 %, y a activos financieros, en un 17%.

c) Liquidación y reconocimiento de los derechos y obligaciones.

La liquidación de los derechos por operaciones corrientes ascendió al 67 % de los ingresos totales, correspondiendo un 12 % a los procedentes de operaciones de capital y un 21 % a los de operaciones de carácter financiero.

Las obligaciones reconocidas por operaciones corrientes suponen el 58 % del total, destinándose el 26 % a operaciones de capital y el 16 % restante a las de carácter financiero, para amortizar los préstamos pendientes.

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos registraron un superávit de 8.746 millones de pesetas. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	4.720 millones de pts.
- Por ejercicio corriente	4.026 millones de pts.
Suma (superávit)	8.746 millones de pts.

e) Indicadores significativos

- La formación bruta de capital ha sido de 34.299 millones de pesetas, lo que supone el 15 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 12.655 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, tanto por operaciones corrientes como de capital, representaron el 44 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido negativa (desinversión) en 1.113 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros ha sido positiva (aumento del endeudamiento), por 7.640 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Diputaciones Provinciales.

No presentan irregularidades destacables.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta por los ocho Ayuntamientos incluidos en este grupo y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación de todos ellos.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes

Los 35 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 34 casos, no constando su aprobación en el Ayuntamiento de Benavente.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

De los 114 Ayuntamientos examinados en este grupo, todos han rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, excepto en 30 casos.

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

Diputaciones Provinciales.

No presentan irregularidades destacables.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en todos los Ayuntamientos incluidos en este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta los 35 Ayuntamientos que forman el grupo.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, excepto las de los Ayuntamientos de Aranda de Duero y Benavente.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Diputaciones provinciales.

No presentan irregularidades destacables.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de los ocho Ayuntamientos que forman este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran este grupo. Asimismo ha sido aprobado por el Pleno en todos los casos excepto en los seis siguientes: Ayuntamientos de Aranda de Duero, La Bañeza, Venta de Baños, Medina del Campo, Peñafiel y Benavente.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Diputaciones provinciales.

No presentan irregularidades destacables.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido debidamente aprobada por el Pleno, excepto el Ayuntamiento de Valladolid, cuya aprobación no consta.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, pero no consta hayan sido aprobadas en los diez siguientes: Ayuntamientos de Aranda de Duero, La Bañeza, La Robla, Villafranca del Bierzo, Guardo, Cuéllar, El Espinar, Medina del Campo, Peñafiel y Benavente.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas,los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. No coinciden algunos de los saldos finales a 31 de diciembre de 1989 con los iniciales a 1 de enero de 1990, en las Cuentas de Presupuesto.

Se han encontrado diferencias en los saldos de los derechos pendientes de cobro y de pago en los Ayuntamientos de La Robla, Ciudad Rodrigo, Tordesillas, Ávila, Santa María de Tormes, Gusendos de los Oteros, Ataquines, Encinas de Esgueva, Hornillos de Eresma, Villamuera de la Cueza y Fontiveros.

3.2.2. Los gastos por operaciones corrientes en el presupuesto inicial son mayores que los ingresos por operaciones corrientes.

Esta anomalía se ha observado en las cuentas de los Ayuntamientos de Fontiveros, Espinosa del Camino, Mantinos , Villaumbrales, El Sahugo, Masueco, Miranda del Castañar, Valdevacas y Guijar, Espeja de San Marcelino , Tajueco, Encinas de Esgueva y Hornillos de Eresma.

3.2.3. Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el artículo 452 del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una constante en la legislación de las Haciendas Locales y se ha confirmado en el artículo 146 de la Ley 39/1988, reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en las Diputaciones Provinciales de Avila y Palencia; en 6 Ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes: Zamora, Arévalo, La Robla, Béjar, El Espinar y Laguna de Duero, y en 10 Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes: Bernuy Zapardiel, Castellanos de Zapardiel, Fontiveros, Orbaneja Riopico, Terradillos de Esgueva, Dios le Guarde, Linares de Riofrío, Salvatierra de Tormes, Gallegos de Hornija y Olmedo.

3.2.4. Se contabilizan como ingresos en las Cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalía es, con gran diferencia, la más frecuente en esta Comunidad, ya que se encuentra en 28 de las 58 cuentas examinadas (el 48 % del total).

3.2.5. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deben comprobar la posible existencia de valores prescritos y darlos de baja en las cuentas.

Se encuentran en este caso 13 Corporaciones de las 58 examinadas (el 22 % del total).

3.2.6. En las cuentas de Presupuesto y de Administración del Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, y se provocan desajustes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al registrar la contratación de nuevos préstamos.

Estas anomalías se observan en 15 de las 58 Cuentas examinadas (el 26 % del total).

3.2.7. Se carece de información sobre la recaudación, bien porque no lo hacen los Recaudadores de la Corporación o porque no la rinden los Servicios de Recaudación, provinciales o autonómicos, que cumplen esta función para los Ayuntamientos.

Estas irregularidades se observan en 13 Ayuntamientos, en periodo voluntario, y en 14 Ayuntamientos en periodo ejecutivo.

Estos valores suponen el 22 %, en periodo voluntario, y el 22 %, en periodo ejecutivo, del colectivo examinado.

3.2.8. En la Cuenta General de Presupuesto los ingresos iniciales corrientes (capítulos 1 a 5) son inferiores a los gastos iniciales corrientes (capítulos 1 a 4), incrementados en las amortizaciones del capítulo 9 de gastos, en 5 de las 58 Corporaciones examinadas (el 9 % del total).

El presupuesto de 1990 se ha liquidado con déficit en seis de las 58 Corporaciones examinadas: Diputación Provincial de Avila, Arévalo, La Robla, Guardo, Venta de Baños y Olmedo (el 10 % del total).

3.2.9. No enlaza la Cuenta de Administración del Patrimonio con los saldos de la Cuenta anterior en tres de las 58 Corporaciones examinadas (el 5 % del total).

3.2.10. Se han contabilizado en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto otras operaciones presupuestarias, distintas de las subvenciones, en 15 de las 58 Corporaciones examinadas (el 26 % del total).

3.2.11. En la Cuenta de Tesorería está incompleta la conciliación de los saldos bancarios en 6 de las 58 Corporaciones examinadas (el 10 % del total), por lo que no se asegura la exactitud de los saldos de esta cuenta.

La existencia en efectivo en la caja de la entidad al finalizar el ejercicio era superior a un millón de pesetas en 7 de las 58 Corporaciones examinadas: Astorga, Ciudad Rodrigo, Cuéllar, Cerezo de Arriba, Linares de Riofrío, Cobos de Fuentidueña y Fuentepelayo (el 12 % del total). Se debe estudiar la oportunidad y adecuación de estos saldos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

1.- EL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA EN EL EJERCICIO DE 1990

El alcance del presente apartado está delimitado por las entidades que integran el sector local y se refiere a la información contable correspondiente al ejercicio de 1990.

El conjunto de entidades locales de Cataluña está formado por las unidades de decisión siguientes:

	Número	Org. aut. administrativos	Org. aut. comerciales	Sociedades Mercantiles	TOTAL
Municipios	942	437	12	106	555
Comarcas	41	15	0	3	18
Diputaciones	4	24	0	4	28
Entidades locales menores	61	--	--	--	--
Entidades metropolitanas	2	0	0	3	3
Mancomunidades	86	1	1	1	3
Consorcios	25	--	--	--	--
TOTAL	1.161	477	13	117	607

Entidades Locales y Consorcios....	1.161
Organismos Autónomos	490
Sociedades Mercantiles	117
Total Subsector Público Local	1.768

2.- CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, LAS ENTIDADES MUNICIPALES DESCENTRALIZADAS Y LAS MANCOMUNIDADES

2.1.- OBSERVACIONES

En función de los objetivos marcados en este trabajo, relativo a las cuentas anuales de los Ayuntamientos, Entidades municipales descentralizadas y Mancomunidades, las observaciones a hacer son las siguientes:

1) Rendición de cuentas.

El nivel de rendición de éstas ha sido insuficiente en el caso de los Ayuntamientos y extremadamente bajo para las Entidades municipales descentralizadas y las Mancomunidades:

En el caso de los municipios, el grado de respuesta alcanzado en porcentaje sobre el total de su número (942) y de la población que representan los que han remitido cuentas sobre el número de habitantes de Cataluña (5.978.638 según censo de 1986) para cada una de las modalidades de cuentas ha sido el siguiente:

Cuenta	Número(%)	Población(%)
General del Presupuesto	58	92
de Administración del Patrimonio	32	67
de la Tesorería	35	79
de Valores Indep. y Aux. del Pres.	51	85

Los Ayuntamientos que no han rendido cuentas son principalmente los de menor población, incumplimiento que puede ser motivado, en gran parte, por la insuficiencia de recursos materiales y humanos y por la falta de soporte técnico adecuado al alcance. Estas consideraciones son apliables, en general, al conjunto nacional de los Ayuntamientos.

Las Entidades municipales descentralizadas y las Mancomunidades han rendido la Cuenta General del Presupuesto en el 10 % y 9 % de los casos, respectivamente, por lo que se refiere al número de entidades.

Estos resultados obtenidos que, en general, mantienen la tónica de los alcanzados en el anterior ejercicio de 1989, se deben ver modulados por tres factores a considerar:

- La mayor presión, vigilancia y seguimiento ejercidos por lo que se refiere a la rendición de las cuentas de los Ayuntamientos frente a la efectuada hacia las Entidades municipales descentralizadas y las Mancomunidades.

- La recogida y tratamiento de la documentación de las cuentas anuales se ha disminuido en 7 meses en relación con el ejercicio anterior. A pesar de todo esto, en algunos casos se ha mejorado el grado de respuesta del año 1990 respecto al de 1989.

- Aunque la fecha límite de presentación de las cuentas tenía que haber sido la del 15 de octubre de 1991, para el ejercicio de 1990 se ha seguido aceptando documentación entregada con retraso hasta la fecha de cierre que, en este caso, ha sido la del 31 de marzo de 1992.

Se pretende que, en el próximo informe correspondiente al ejercicio de 1991, se entre ya en un periodo de normalidad.

2) Cumplimiento normativo.

En cuanto al cumplimiento normativo de los entes locales que han rendido la Cuenta General de la Corporación, se observa que, si bien la forma en que se presentan y su contenido es bastante heterogéneo, en términos generales la normativa se respeta por lo que hace referencia a las cuentas que la forman, contenido y justificantes que las deben acompañar.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, alrededor del 60 %, los entes locales incumplen el plazo legal de rendir las cuentas, previsto en el artículo 9.1 de la Ley 6/1984, de 5 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, modificado por la Ley 15/1991, de 4 de julio, donde se fija la fecha límite del 15 de octubre del año siguiente al del cierre del ejercicio.

3) Aprobación de las cuentas.

La aprobación de las cuentas rendidas, por lo que se ha podido observar en los expedientes de tramitación, ha sido justificada en un porcentaje aceptable.

No obstante, para aquellos casos en que esta condición no se ha cumplido, se debe tener presente que, para toda cuenta que se somete a examen por parte del órgano fiscalizador externo, como norma elemental se debería presentar debidamente aprobada por parte del Pleno de la Corporación y con todos los trámites cumplidos a fin de garantizar los principios de legalidad y publicidad de las cuentas públicas.

4) Aspectos formales de las cuentas.

En general, las cifras de las cuentas cuadran, son consistentes entre sí, se da una aceptable correspondencia entre las diferentes cuentas y otros estados auxiliares, y que hay coherencia de saldos entre el ejercicio corriente y los anteriores.

5) Otras observaciones relacionadas con los objetivos fijados.

Si el grado de cumplimiento, por lo que se refiere a la rendición de las Cuentas Generales de las entidades locales, no es todo lo satisfactorio que sería de desear, en muchos casos se debe al incumplimiento en la formalización y posterior aprobación de dichas cuentas, más que a la falta de su envío.

6) Resultados analíticos de las cuentas.

a) Cuenta General del Presupuesto

Es de señalar la diferencia en exceso que se da entre las previsiones iniciales y las definitivas en los presupuestos de las entidades locales. En el caso concreto de los municipios estas desviaciones para el ejercicio corriente (capítulos 1 a 9) son del orden del 46 % en los ingresos y del 49 % en los créditos para gastos.

El resultado agregado de la ejecución presupuestaria, alcanzado por los 551 Ayuntamientos de los cuales se han obtenido datos a efectos de esta cuenta, ha sido de un superávit de 30.777 millones de pesetas a nivel de presupuesto refundido.

La cifra del resultado presupuestario refundido no se estima plenamente representativa por dos razones. En primer lugar, por una no rigurosa aplicación de los principios presupuestarios y contables. En segundo lugar, por la necesidad de depurar las resultas de ejercicios ya cerrados, a fin de que los datos y cifras de las cuentas se ajusten cada vez más a la realidad de la gestión presupuestaria que se ha llevado a cabo hasta la fecha del cierre del ejercicio.

Sin embargo, también se debe ver relativizado el valor de aquel superávit por el volumen del incremento del saldo vivo por endeudamiento de los 551 municipios que se ha producido durante el ejercicio y que se cuantifica en 41.701 millones de pesetas.

De estos 41.701 millones de pesetas de saldo vivo de endeudamiento, sólo quedan libres para nuevas inversiones o para coberturas de otro tipo de gastos, 3.037 millones de pesetas. El nuevo endeudamiento durante el año 1990 (194.717 millones de pesetas) apenas cubre las amortizaciones (153.016 millones de pesetas) del endeudamiento acumulado más los intereses y comisiones (38.664 millones de pesetas) que han devengado dichas operaciones financieras.

b) Cuenta de Administración del Patrimonio.

La cuantía agregada del patrimonio líquido que presentan los 302 Ayuntamientos que han entregado esta cuenta, con un valor en conjunto de 696.705 millones de pesetas, se estima que no es debidamente representativa.

No parece procedente hacer un análisis de las cifras de esta cuenta, dado que no ofrecen suficientes garantías en cuanto a poder dar una imagen fiel de la realidad patrimonial de los municipios de referencia.

Incluso considerando estrictamente los integrantes de la cuenta, tal y como se encuentra definida, su valoración ha presentado graves problemas, especialmente por lo que hace relación a los diferentes activos que componen el inventario de bienes y derechos.

Este hecho, conjuntamente con las cifras que se han facilitado en ciertos casos para los pasivos financieros, da lugar a dudas fundamentadas sobre la razonabilidad de las cifras finales del patrimonio líquido (o déficit patrimonial, en caso de ser negativo) que se presentan en el informe.

c) Cuenta de la Tesorería.

La principal limitación de la Cuenta de la Tesorería es que tan sólo recoge información a nivel presupuestario. Quedan excluidos, por tanto, las existencias de fondos (saldos iniciales y finales) y los movimientos (cobros y pagos) correspondientes a cada periodo por lo que se refiere a las operaciones no presupuestarias.

Estas últimas operaciones se corresponden con la agrupación de metálico de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto que, conjuntamente con la agrupación de valores, configuran la cuenta del mismo nombre.

Dos conclusiones que ya se observaron en el informe correspondiente al año anterior son las siguientes: Primero, que a nivel agregado de municipios, los pagos trimestrales se efectúan en general en función de los cobros registrados por operaciones presupuestarias, y segundo, que se sigue dando un alto grado de concentración de los movimientos de la tesorería en el último trimestre del año, donde se alcanza, en términos generales, aproximadamente el 36 % del total anual.

d) Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.

La limitación más clara que padece la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto es que no da información de saldos y movimientos de las cuentas de la agrupación de metálico en función de su naturaleza deudora o acreedora, según sea en cada caso.

Sin embargo, y si bien no se ha podido analizar la correcta imputación de las operaciones, de la observación de las cifras de las cuentas se puede afirmar que a menudo existe una indebida utilización de las cuentas a la hora de aplicar contablemente las diferentes operaciones a las dos agrupaciones existentes.

2.2.- RECOMENDACIONES

1) En cuanto a la no presentación de la Cuenta General por parte de las entidades locales en la forma y tiempo debido, sería necesario establecer una serie de medidas encaminadas, en primer término, a facilitar a los cuentadantes su cumplimiento en condiciones de normalidad, y, en segundo término, para aquellos casos en que persista una actitud reiterada de falta de colaboración y omisión en la entrega de las cuentas a la Sindicatura, se actúe en consecuencia ante el incumplimiento.

2) Sería conveniente que el Proyecto de Ley de Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas que está previsto enviar al Parlamento por parte del Consejo Ejecutivo de la Generalidad[1], regule más ampliamente la obligación de colaboración y cooperación de todos los entes del sector público catalán, así como que desarrolle la legislación básica del Estado por lo que se refiere al sistema de responsabilidad de la Administración pública local de Cataluña[2].

Especialmente sería necesario prever las acciones que se deberían emprender en aquellos casos en que se deje de rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas, o que se haga con graves defectos o sin solventar sus objeciones, por parte de cualquier persona sujeta a esta obligación.

3) Más importantes que las actuaciones sancionadoras lo tienen que ser las estimuladoras del cumplimiento de la formalización, la aprobación y el rendimiento de las cuentas a la Sindicatura de Cuentas, por parte de los Entes Locales de Cataluña.

En consecuencia es aconsejable que se dé un mayor impulso a las funciones de asistencia y cooperación económica, jurídica y técnica a los Entes Locales, que complemente la tutela financiera que competencialmente corresponde a la Generalitat[3] y que a la vez se establezcan criterios de coordinación en el ejercicio de estas mismas funciones por parte de los otros entes locales supramunicipales que tienen atribuidas competencias concurrentes en la materia[4].

4) Es preciso instar también a otros estamentos locales de nivel superior al municipal, como son las Diputaciones y Consejos Comarcales, que, de acuerdo con sus competencias, prestan la asistencia y cooperación jurídico-administrativa, económico-financiera y técnica, especialmente dirigida a los Ayuntamientos que tienen menos capacidad económica y de gestión[5].

Particularmente hace falta un refuerzo del papel en los Consejos comarcales, como instancias más cercanas a los municipios, en cuanto al asesoramiento técnico en la gestión económico-financiera y patrimonial en materia de contabilidad y presupuestos, así como muy especialmente a fin de dar soporte informático en la implementación del nuevo sistema de información contable diseñado para entrar en vigor a partir del ejercicio en curso de 1992.

5) Municipios, Entidades municipales descentralizadas y Mancomunidades sería conveniente que, en la medida que sus disponibilidades presupuestarias lo permitan y de acuerdo con la normativa vigente, dotasen de los recursos materiales y humanos las áreas de administración, contabilidad y gestión económico-financiera, y muy especialmente por lo que al control interno se refiere, a fin de que puedan desarrollar las tareas que tienen asignadas.

6) Para el caso concreto de las Mancomunidades que queden inactivas o hayan dejado de ser operativas, es preciso que sus integrantes se replanteen el futuro de estas entidades y en caso de encontrar innecesario su mantenimiento se proceda a iniciar el trámite de su disolución. Un vez se formalice la disolución será preciso comunicarlo a las instancias competentes a efecto del Registro de entes locales.

7) Es indispensable efectuar una rigurosa depuración de los saldos de operaciones presupuestarias de ejercicios ya cerrados, y muy especialmente por lo que se refiere a la vertiente de los ingresos.

El momento adecuado para hacerlo habrá sido precisamente el de la aplicación de la nueva contabilidad. La Orden de 31 de mayo de 1991 (Ministerio de Economía y Hacienda), por la que se aprueban instrucciones para la apertura de la contabilidad en el nuevo sistema de información contable para la Administración Local así lo prevé en los puntos 2.5 y 2.6 de la 1ª parte, referida a las Normas generales, y, en particular en el punto 4.2 relativo a las Cuentas de deudores de la 2ª parte, referida al Balance de situación inicial a 1 de enero de 1992.

[1] Esta previsión se encuentra contenida en la Disposición Final 2ª de la Ley 15/1991, de 4 de julio, citada

[2] Por lo se refiere al régimen de responsabilidad de cargos políticos y funcionarios al servicio de la Generalitat, este aspecto ya se encuentra legislado en el Capítulo VIII de la Ley 10/1982, de 12 de julio, de Finanzas Públicas de Cataluña.

[3] Amparadas por el reconocimiento del artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña

[4] Esta tarea la debe efectuar la Administración de la Generalitat de acuerdo con el artículo 108 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña

[5] Las competencias de las Diputaciones vienen amparadas por el artículo 88 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, mientras que las de Comarcas en este sentido se prevén en el artículo 33 de la Ley 6/1987, de 4 de abril, sobre la organización comarcal de Cataluña

3.- CUENTAS DE LAS DIPUTACIONES Y LOS CONSEJOS COMARCALES

3.1.- CUENTAS DE LAS DIPUTACIONES

Se incluyen por primera vez las cuentas de las cuatro Diputaciones Catalanas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 12/1982 de 12 de julio de Finanzas Públicas de Cataluña, al decir:

"....
2.- Se unirán a la cuenta general de la Generalitat las cuentas generales de las diputaciones provinciales.
....".

Para este ejercicio, la información que se incorpora se refiere exclusivamente a la liquidación del presupuesto.

Se incluyen los cuadros de liquidación de los presupuestos agregados de las cuatro Diputaciones Provinciales en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial.

La presentación se hace a nivel de capítulos presupuestarios, con totalizaciones parciales tanto en ingresos como en gastos, de manera que pueden apreciarse los volúmenes respectivos de las operaciones corrientes, de las operaciones de capital y de las operaciones financieras.

La Diputación de Barcelona, anticipándose al compromiso legal fijado para el ejercicio de 1992, optó ya en el ejercicio de 1990 por adaptar su presupuesto a la nueva estructura económica y funcional establecida por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989, en desarrollo de la Ley 39/1988 de regulación de las Haciendas Locales.

Esta circunstancia afecta la homogeneidad del contenido de las aplicaciones presupuestarias si se pretende relacionar las cifras de la Institución barcelonesa con las de las otras corporaciones provinciales catalanas.

Por este motivo, se han presentado los cuadros por capítulos, sin mayor detalle, ya que a este nivel, la incidencia de la nueva estructura presupuestaria sólo afecta a un volumen moderado de gastos de material inventariable, que ha pasado del capítulo II al capítulo VI.

Se ha comprobado, además, que esta alteración puede llegar a ser del orden de los 300 millones de pesetas en obligaciones reconocidas. Relacionada con el volumen de obligaciones reconocidas de las cuatro Diputaciones (152.363 millones), resulta partida de escasa importancia (0,2 %) a efectos de la presentación de las cuentas.

3.2.- CUENTAS DE LOS CONSEJOS COMARCALES

El ejercicio de 1990 ha sido el tercero en que los Consejos Comarcales han remitido sus cuentas.

Este periodo corresponde al de iniciación de actividades de estas entidades de nueva creación a partir de las Leyes de Ordenación Territorial promulgadas durante 1987.

Para este ejercicio, la información que se incorpora se refiere exclusivamente a la liquidación del presupuesto. Otras consideraciones analíticas serán formuladas a partir de elementos de análisis más extensos tratados en informes puntuales previstos para más adelante.

Se incluyen los cuadros de liquidación de los presupuestos de cada uno de los 26 Consejos Comarcales que han remitido la información de 1990 y el cuadro resultante de la agregación de todos ellos en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial.

Si se hace una revisión global de la evolución del conjunto de Consejos Comarcales desde su inicio, a partir de los agregados de los tres ejercicios, se obtiene:

Año	Consejos agregados	Obligaciones reconocidas	media por C. Comarcal	habitantes comprendidos	media por habitante
1988	36	729.171,8	20.254,8	5.681.468	0,13
1989	33	5.516.648,0	167.171,2	5.645.807	0,98
1990	26	11.389.607,1	438.061,8	2.349.362	4,85

(importes en miles de pesetas)

Los datos de 1990 se refieren, pues, al agregado de los 26 Consejos Comarcales recibidos. Faltan: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Baix Camp, Anoia, Montsià, Noguera, Ripollès, Ribera d'Ebre, Pla de l'Estany, Garrigues, Segarra, Terra Alta, Val d'Aran y Pallars Sobirà.

4.- CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES

4.1.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Organismos Autónomos Administrativos:

Ayuntamientos	437
Diputaciones	24
Consejos Comarcales	15
Mancomunidades	1
Total	477

Organismos comerciales, industriales, financieros o análogos:

Ayuntamientos	12
Mancomunidades	1
Total	13

4.2.- CUADROS INDICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTOS	Ayuntamientos	CONSEJOS COMARCALES	DIPUTACIONES	MANCOMUNIDADES
DEPORTES	66	-	1	1
ACTIV. SOCIALES	87	2	2	-
EDUCACION Y CULTURA	137	3	9	-
VIVIENDA	12	-	-	-
INFORMACION Y COMUN.	47	1	-	-
TURISMO, FERIAS Y FIESTAS	43	6	2	-
SANIDAD	21	1	4	-
OTROS	24	2	6	-
TOTALES	437	15	24	1

ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS

CONCEPTOS	Ayuntamientos	MANCOMUNIDADES
DEPORTES	-	-
ACTIV. SOCIALES	1	1
EDUCACION Y CULTURA	2	-
VIVIENDA	1	-
INFORMACION Y COMUN.	2	-
TURISMO, FERIAS Y FIESTAS	4	-
SANIDAD	1	-
OTROS	1	-
TOTAL	12	1

4.3.- RENDICIÓN DE CUENTAS

El grado de cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas es aproximadamente de un 50 %. No obstante este porcentaje, teniendo en cuenta la importancia de los Organismos que han rendido las cuentas, representa un tanto por ciento muy superior del total de los presupuestos, sin poderse precisar.

Por otro lado, como el artículo 190.2 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, teniendo en cuenta el contenido de la Disposición Transitoria novena, autoriza adecuar la contabilidad y presupuestos de las Entidades Locales en el plazo de 2 años, ello ha motivado que la documentación rendida no sea uniforme.

En consecuencia, los agregados que se han confeccionado, reflejan únicamente las liquidaciones de los presupuestos, las cuentas de tesorería y las cuentas VIAP; las cuales juntamente con la cuenta de Administración de Patrimonio y según el artículo 459 del Real Decreto legislativo 781/1986 de 18 de abril, deben rendir las Entidades Locales a los efectos de conocimiento, examen y fiscalización de la gestión económica.

En la cuenta de Administración de Patrimonio no se ha podido efectuar la agregación por el hecho de que, excepcionalmente, sólo la ha remitido un 5 % de las entidades.

El estado que se acompaña a continuación refleja el grado de cumplimiento, al cual se ha hecho referencia con anterioridad.

	OOAA AYUNTAM	OOAA DIPUTAC	OOAA CONS C. OM	OOAA MANCOM	OOAA TOTAL	ECIF AYUNTAM	ECIF MANCOM.	ECIF TOTAL
CENSO TOTAL ORGANISMOS	437	24	15	1	477	12	1	13
• QUE NO HAN REMITIDO NADA (Incluyendo aquellos organismos que únicamente han remitido la aprobación de las cuentas sin ninguna cifra)	225	10	10	1	246	5	0	5
• QUE HAN REMITIDO ALGUN DATO	212	14	5	0	231	7	1	8
	437	24	15	1	477	12	1	13
Los agregados han sido confeccionados considerando independientemente los tres estados (Liquidación del Presupuesto, Cuenta de Tesorería y VIAPs), por tanto, un organismo que ha remitido la Cuenta de Tesorería pero no la Liquidación del Presupuesto ni la cuenta de VIAPs estará incluido únicamente en el agregado de la Cuenta de Tesorería								
Considerando esta aclaración, podemos distinguir								
1- Agregado de la Liquidación del Presupuesto:								
A) Organismos que han remitido correctamente la Liquidación del Presupuesto que, por tanto, ha sido incluida en el agregado	171	14	5	0	192	7	1	8
B) Organismos que han remitido parcialmente la Liquidación del Presupuesto, o bien no la han remitido (aunque sí han remitido la Cuenta de Tesorería o VIAPs). No incluidos en el agregado	39	0	0	0	39	0	0	0
	212	14	5	0	231	7	1	8
2- Agregado de la Cuenta de Tesorería:								
A) Organismos que han remitido correctamente la Cuenta de Tesorería que, por tanto, ha sido incluida en el agregado	98	14	2	0	114	2	1	3
B) Organismos que han remitido incorrectamente la Cuenta de Tesorería o bien no la han remitido. No incluidos en el agregado	114	0	3	0	117	5	0	5
	212	14	5	0	231	7	1	8
3- Agregado de la Cuenta de VIAPs:								
A) Organismos que han remitido correctamente la Cuenta de VIAPs que, por tanto, ha sido incluida en el agregado	86	9	1	0	96	2	1	3
B) Organismos que han remitido incorrectamente la Cuenta de VIAPs o bien no la han remitido. No incluidos en el agregado	126	5	4	0	135	5	0	5
	212	14	5	0	231	7	1	8
* Los organismos que han remitido correctamente los tres estados, y los tres se han incluido en el agregado correspondiente, han sido	65	9	1	0	75	1	1	2

5.- SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES DE LAS CORPORACIONES LOCALES

5.1.- RENDICIÓN DE CUENTAS SOCIEDADES MERCANTILES Y RESPUESTAS OBTENIDAS

Total registradas	117
Rinden cuentas	107
Porcentaje de rendición	91,4%
No rinden cuentas	10
Porcentaje de no rendición	8,6%

Estas diez empresas corresponden a:

	SS.MM.
Corp. Locales de 1.001/5.000 habitantes	4
Corp. Locales de 5.001/20.000 habitantes	2
Corp. Locales de 20.001/50.000 habitantes	2
Corp. Locales de más de 50.001 habitantes	1
Consejos Comarcales	1
TOTAL	10

Este conjunto de respuestas y de omisiones en la rendición de las cuentas es bastante significativo y denota el alto grado de respuesta conseguida este año, lo que ha hecho posible que la relación nominal y numérica de las Sociedades Mercantiles con capital mayoritario de las Corporaciones Locales elaborada por la Sindicatura pueda considerarse prácticamente como definitiva a 31 de diciembre de 1990.

5.2.- CUENTAS DE BALANCE

EJERCICIO 1990

EMPRESAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE CATALUÑA (AGREGADO DE 103 EMPRESAS CON DATOS ECONOMICOS)

CUENTAS DE BALANCE	1990	
	IMPORTE	%
Activo Inmovilizado neto	96.477,2	78,02
Inmovilizado material	109.388,6	88,46
Otros Inmovilizados	16.440,6	13,30
Amortizaciones Acumuladas	(29.352,0)	23,74
Activo circulante neto	27.178,1	21,98
Activo circulante	13.406,6	10,84
Tesorería	13.771,5	11,14
Total Activo neto	123.655,3	100,00
Patrimonio neto	50.252,9	40,64
Préstamos y créditos	73.402,4	59,36
Total Pasivo	123.655,3	100,00

(Cifras en millones de pesetas)

De los datos reflejados en este cuadro, se desprende que en 1990 el Activo total neto alcanzó los 123.655,3 millones de pesetas, el Activo Inmovilizado neto fue de 96.477,2 millones de pesetas, un 78 % del Activo total neto, mientras el Activo circulante neto llegó a 27.178,1 millones de pesetas, un 22 % del Activo total neto.

En cuanto a la estructura del Pasivo propio o Patrimonio neto, alcanzó 50.252,9 millones de pesetas, lo que representa un 40,6 % del Pasivo, mientras los Préstamos y Créditos alcanzaron los 73.402,4 millones de pesetas, un 59,4 % del Pasivo.

5.3.- CUENTAS DE RESULTADOS

EJERCICIO 1990

EMPRESAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE CATALUÑA (AGREGADO DE 103 EMPRESAS CON DATOS ECONOMICOS)

CUENTA DE RESULTADOS	1990	
	IMPORTE	%
Producción o Venta de Mercaderías o Servicios	55.290,8	68,7
Subvenciones	25.195,1	31,3
Total	80.485,9	100,0
Compras y Suministros +/- Dif. inventario	(32.490,3)	(40,4)
Valor añadido	47.995,6	59,6
Gastos de Personal	(34.290,0)	(42,6)
Dotación Amortizaciones	(5.521,1)	(6,9)
Resultado de explotación	8.184,5	10,2
Ingresos Financieros	1.099,4	1,4
Gastos Financieros	(12.280,4)	(15,3)
Otros (Resultados Extraordinarios)	(676,3)	(0,8)
Resultado neto total	(3.672,6)	(4,5)

(Cifras en millones de pesetas)

En este cuadro los porcentajes se calculan en relación con el total de las Ventas más las Subvenciones de explotación.

De los datos reflejados en este cuadro, se desprende que la cifra de Ventas más Subvenciones fue la de 80.485,9 millones de pesetas, de los cuales 55.290,8 millones de pesetas (un 68,7 %) corresponden a Ventas, y 25.195,1 millones de pesetas (un 31,3 %) corresponden a Subvenciones de explotación.

Una vez deducido el coste de materiales y servicios resulta un Valor Añadido de 47.995,6 millones de pesetas Del total de Gastos, los de Personal con 34.290 millones de pesetas, los Financieros con 12.280,4 millones de pesetas, y las Amortizaciones con 5.521,1 millones de pesetas, destacan como las partidas más importantes.

El Resultado neto total, contando con un crecimiento de las ventas respecto del año pasado de 22.697 millones de pesetas y con un crecimiento de las subvenciones de 13.678 millones de pesetas, equivalentes a un incremento porcentual del 69,6 % y el 118,8 % respectivamente, fue negativo en 3.672,6 millones de pesetas. De esta cifra, hay que destacar las cifras de resultados negativos y positivos superiores a los 500 millones de pesetas: Transports de Barcelona, S.A., de -1.963 millones de pesetas, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., de -2.320 millones de pesetas, Societat de Gestió Cadastral i Tributària de la Diputació de Barcelona, de -1.953 millones de pesetas, y las de resultados positivos de 802 millones de pesetas de la Societat d'Aparcaments i Serveis, S.A., de Barcelona.

Dado que las magnitudes agregadas que se glosan se han obtenido a partir de considerar la participación de las Corporaciones Locales en el capital de las Sociedades Mercantiles como si en todas fuese del 100 %, y como esto no se da así en un determinado número de casos ya relacionados, hechos los cálculos correspondientes para aproximar más la realidad y referidos sólo a las magnitudes del Activo y de los Gastos, sería necesario rebajarlas en los años 1989 y 1990 respectivamente; en 6.847 y 9.142 millones de pesetas por lo que se refiere al Activo y en 2.667 y 4.572 millones de pesetas por lo que se refiere a los Gastos. Los porcentajes de incremento del año 1990 respecto de 1989 quedan, una vez hechos los cambios indicados, en el 43,8 % y el 49,6 %, ligeramente diferentes a los calculados (43,3% y 50,6% respectivamente).

Correlativamente la pérdida en las economías de las Corporaciones Locales, si la consideramos sólo en la parte correspondiente a la participación real de éstas en las Sociedades Mercantiles y una vez hechos los cálculos correspondientes, encontramos que aquella incidencia quedaría reducida en 878,8 millones de pesetas, principalmente debido a que la participación de la Diputación de Barcelona en la Societat de Gestió Cadastral i Tributària, S.A. es sólo del 50,78 %. La pérdida total sería de 2.793,8 millones de pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Extremadura, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo A: Diputaciones	2	2	
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.	3	3	-
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes.	40	40	-
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.	337	25	77

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye las dos Diputaciones provinciales y 63 municipios.

En ingresos, las transferencias corrientes suponen el 41 % de los ingresos del ejercicio corriente y las transferencias de capital el 19 %, correspondiendo el restante 40 % a tasas y otros ingresos (12 %), a impuestos directos (el 11 %), a pasivos financieros (el 10 %) y a los demás capítulos presupuestarios (el 6 %).

En cuanto a gastos, los destinados a inversiones reales ascienden al 35 % del total previsto y los de retribuciones de personal al 33 %, correspondiendo el restante 32 % a compra de bienes y servicios (el 15 %) y a los demás capítulos presupuestarios (el 17 %).

Las resultas de ejercicios cerrados son el 24 % del presupuesto refundido, en ingresos, y el 24 %, en gastos.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito (capítulos 0 a 9) por importe de 10.965 millones de pesetas, que suponen el 14 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones asciende a un 19 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse de cuantía media.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en la realización de inversiones reales, por el 23%, en la variación de activos financieros, por el 33 %, y en la variación de pasivos financieros, por el 31 %.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El reconocimiento de los derechos por operaciones corrientes asciende al 60 % de los totales, correspondiendo un 17 % a los procedentes de operaciones de capital y el restante 23 % a los de operaciones financieras.

El reconocimiento de las obligaciones por operaciones corrientes suponen el 52 % del total, destinándose el 31 % a operaciones de capital y el 17 % restante a las financieras para amortizar los pasivos existentes (el 11 %) y para inversiones financieras (el 6 %).

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos tienen un superávit de 853 millones de pesetas. Esta cifra debe considerarse con cierta reserva, pues en su obtención han intervenido derechos pendientes de cobro por importe de 24.099 millones de pesetas, que suponen el 83 % del total de las resultas de ingresos, y su realización puede presentar ciertas dificultades. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	(825) millones de pts.
- Por ejercicio corriente	1.678 millones de pts.
Suma (superávit)	853 millones de pts.

e) Indicadores significativos

- La formación bruta de capital ha sido de 18.025 millones de pesetas, lo que supone el 22 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 10.070 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, representaron el 53 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido negativa (desinversión) y supuso 115 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros ha sido positiva (aumento del endeudamiento) y ascendió a 3.790 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta en los tres Ayuntamientos incluidos en el grupo y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, con la excepción del Ayuntamiento de Cáceres, del que no consta la aprobación.

En el Ayuntamiento de Mérida falta el expediente de aprobación de la cuenta.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes

Los 40 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 36 casos, no constando su aprobación en los 4 restantes: Don Benito, Llerena, Quintana de la Serena y Miajadas.

No consta la aprobación de la liquidación por el Alcalde-Presidente en los Ayuntamientos de Fregenal de la Sierra y Villanueva de la Serena.

No consta la firma de la liquidación por el Interventor en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

No consta la firma de la cuenta por el Interventor en los Ayuntamientos de Don Benito, Llerena, Quintana de la Serena y Villanueva de la Serena.

No consta el informe de la Comisión Especial de Cuentas en los Ayuntamientos de Don Benito, Llerena, Quintana de la Serena, Villanueva de la Serena y Miajadas.

No consta el expediente de aprobación de la cuenta en el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Los 25 Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en todos los casos.

No consta la aprobación de la liquidación por el Presidente en el Ayuntamiento de Montemolín.

No consta el informe de la Comisión Especial de Cuentas en el Ayuntamiento de La Coronada.

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

Municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta dos Ayuntamientos de los tres que forman el grupo, y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en uno de ellos, no constando dicha aprobación en la Cuenta del Ayuntamiento de Cáceres.

No ha rendido la Cuenta de Administración de Patrimonio el Ayuntamiento de Mérida.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

De los 40 Ayuntamientos que forman este grupo, han rendido esta cuenta 34, quedando 6 pendientes: Jerez de los Caballeros, Llerena, Navalvillar de Pela, Quintana de la Serena, Villanueva de la Serena y Navalmoral de la Mata.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno todas, excepto la del Ayuntamiento de Don Benito, donde, además, no ha sido expuesta al público ni informada por la Comisión Especial de Cuentas.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno en un Ayuntamiento, de los 3 que forman el grupo.

En el Ayuntamiento de Cáceres, esta cuenta no ha sido rendida por el Tesorero, ni fiscalizada por el Interventor, ni aprobada por el Pleno.

El Ayuntamiento de Mérida no ha rendido la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran el grupo, con la excepción de dos. Asimismo ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos, excepto en tres Ayuntamientos: Alburquerque, Don Benito, y Talayuela.

La cuenta aparece sin rendir por el Tesorero en el Ayuntamiento de Talayuela, y sin fiscalizar por el Interventor en los Ayuntamientos de Talayuela y Navalmoral de la Mata.

No han rendido la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto los Ayuntamientos de Navalvillar de Pela y Quintana de la Serena.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes.

De los tres Ayuntamientos que forman este colectivo han rendido la cuenta los de Cáceres y Mérida, aunque en ninguno de ellos ha sido debidamente aprobada por el Pleno ni informada por el Interventor.

El Ayuntamiento de Badajoz no ha rendido la Cuenta de Tesorería.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, excepto cinco, pero no consta haya sido aprobada por el Pleno en los seis Ayuntamientos siguientes: Almendralejo, Calamonte, Don Benito, Monesterio, Arroyo de la Luz y Navalmoral de la Mata.

No consta el informe del Interventor en el Ayuntamiento de Calamonte.

Falta el Acta de Arqueo en el Ayuntamiento de Alburquerque.

No han rendido la Cuenta de Tesorería los Ayuntamientos de Alburquerque, Fuente del Maestre, Navalvillar de Pela, Quintana de la Serena y Zalamea de la Serena.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. No coinciden los saldos finales a 31 de diciembre de 1989 con los iniciales a 1 de enero de 1990, en las Cuentas de Presupuesto.

Se han encontrado diferencias en el arrastre de los saldos pendientes de cobro y de pago en los siguientes Ayuntamientos: Navalvillar de Pela, Membrío y La Coronada.

3.2.2. Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son mayores que los ingresos corrientes.

Esta anomalía se ha producido en las cuentas de los siguientes Ayuntamientos: Alburquerque, Montijo, Olivenza, Talayuela y Navas del Madroño.

3.2.3. Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el artículo 452 del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una constante en la legislación de las Haciendas Locales y se ha confirmado en el artículo 146 de la Ley 39/1988, reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en las siguientes Entidades: Diputación Provincial de Badajoz y Ayuntamientos de Mérida, Cabeza del Buey, Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Montijo, Navalvillar de Pela, San Vicente de Alcántara y Zalamea de la Serena.

3.2.4. Se contabilizan como ingresos en las Cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalía es, con diferencia, la más frecuente en esta Comunidad, ya que se encuentra en 32 de las 42 cuentas examinadas (el 76 % del total), según la siguiente relación:

- Diputación de Cáceres y Ayuntamientos de Cáceres y Badajoz.

- Ayuntamientos de Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Abeza del Buey, Calamonte, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Llerena, Monesterio, Olivenza, Puebla de la Calzada, San Vicente de Alcántara, Talavera la Real, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Zafra y Zalamea de la Serena.

- Ayuntamientos de Arroyo de la Luz, Coria, Miajadas, Montehermoso, Moraleja, Talayuela, Trujillo y Valencia de Alcántara.

- Ayuntamientos de La Coronada y Montemolín.

3.2.5. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deben comprobar la posible existencia de valores prescritos y darlos de baja en las cuentas.

Se encuentran en cinco Corporaciones de las 40 examinadas (el 13 % del total): Ayuntamientos de Azuaga, Fuente de Cantos, Monesterio, Zafra y Moraleja.

3.2.6. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, provocando desajustes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Estas anomalías se observan en 21 de las 41 cuentas examinadas (el 51 % del total):

- Diputación Provincial de Badajoz y Ayuntamientos de Badajoz y Cáceres.

- Ayuntamientos de Don Benito, Olivenza, Aceuchal, Alburqueque, Azuaga, Campanario, Fregenal de la Sierra, Puebla de la Calzada, Talavera la Real, Villafranca de los Barros y Zafra.

- Ayuntamientos de Coria, Arroyo de la Luz, Miajadas, Moraleja, Trujillo y Valencia de Alcántara.

- Ayuntamiento de La Coronada.

3.2.7. Carencia de información sobre la recaudación, bien por no rendir cuentas los Recaudadores de la Corporación o los Servicios de Recaudación, provinciales o autonómicos, que prestan este servicio a los Ayuntamientos.

Esta irregularidad se observa en 13 Ayuntamientos, en periodo voluntario, y en 21 Ayuntamientos, en periodo ejecutivo, lo que supone el 32 % (en periodo voluntario) y el 52 % (en periodo ejecutivo) del colectivo examinado.

3.2.8. La Cuenta General de Presupuesto no ha sido informada por la Comisión Especial de Cuentas en 4 Ayuntamientos (el 10 %).

Los ingresos iniciales corrientes (capítulos 1 a 5) son inferiores a los gastos iniciales corrientes (capítulos 1 a 4), incrementados en el capítulo 9 de gastos, en 7 Ayuntamientos, que representan el 17 % del total de Entidades examinadas: Alburquerque, Don Benito, Montijo, Olivenza, Zalamea de la Serena, Talayuela y Trujillo,

El presupuesto de 1990 se ha liquidado con déficit en 9 Corporaciones: Diputación Provincial de Badajoz, Ayuntamientos de Cáceres, Cabeza del Buey, Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Llerena, Villafranca de los Barros y Zalamea de la Serena. Supone el 22 % del total de Corporaciones examinadas.

3.2.9. No coinciden los saldos finales del activo y pasivo de la Cuenta de Administración de Patrimonio, en 1989, con los iniciales de 1990 en tres Ayuntamientos: Coria, Miajadas y Trujillo. Supone el 7 % del total de Entidades examinadas.

3.2.10. Además de las subvenciones, aparecen formalizadas en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto otras operaciones presupuestarias en 12 Corporaciones:

- Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Diputación de Cáceres.

- Ayuntamientos de Almendralejo, Cabeza del Buey, Fregenal de la Sierra, Fuentes de Cantos, Fuente del Maestre, Llerena, San Vicente de Alcántara, Talavera la Real y Villafranca de los Barros (Badajoz),

Supone el 30 % del total examinado.

3.2.11. El acta de arqueo al 31 de diciembre de 1990 no ha sido conciliada, en su totalidad, con las notas o extractos de los Bancos en 10 Ayuntamientos:

- Ayuntamientos de Cáceres y Mérida.

- Ayuntamientos de Almendralejo, Fuente del Maestre, Llerena, Montijo, Villanueva de la Serena, Zafra, Miajadas y Montehermoso,

Supone el 25 % de los Ayuntamientos examinados.

La existencia en Caja es superior a 1.000.000 de pesetas en 8 Ayuntamientos: Azuaga, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Llerena, Villanueva de la Serena, Arroyo de la Luz, Coria y Miajadas. Supone el 20 % del total de Ayuntamientos examinados. Se debería estudiar la oportunidad y adecuación de dichos saldos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

1.- SUBSECTOR PUBLICO LOCAL (DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS)

1.1.- NIVEL PROVINCIAL

PROVINCIA	Nº AYTOS.	DIPUTACIONES	Nº HABITANTES
LA CORUÑA	94	1	1.088.563
LUGO	66	1	381.900
ORENSE	92	1	350.852
PONTEVEDRA	61	1	888.892
TOTALES	313	4	2.710.207

1.2.- NIVEL POBLACIONAL

GRUPO	NIVEL POBLACIONAL	DIPUTACIONES AYUNTAMIENTOS	Nº HABITANTES
I		4 Diputaciones	2.710.207
II	Mayores de 20.000 habitantes	17 Ayuntamientos	1.196.764
III	Entre 5.000 y 20.000 habitantes	116 "	1.034.151
IV	Menores de 5.000 habitantes	180 "	479.292
	TOTAL	317	

2.- CUENTA GENERAL 1990

En el proceso de comprobación de las cuentas generales de las entidades locales del ejercicio 1990 se han puesto de manifiesto diversas deficiencias de carácter económico-financiero, documental y de trámite, las cuales se han tratado de agrupar en seis conceptos básicos, denominados incidencias generales. Si bien aquellas otras más específicas que también se han querido resaltar por su significación dentro del presupuesto definitivo, se mencionan separadamente y bajo el título de incidencias particulares.

2.1.- INCIDENCIAS GENERALES

1ª) La documentación remitida está desordenada, presenta tachaduras, enmiendas y, en ocasiones, es incompleta o ilegible. Dicha documentación generalmente no está compulsada para probar su autenticidad.

Esta incidencia, muy extendida en las cuentas analizadas, reduce la fiabilidad de los datos, produce demoras en su proceso de comprobación y es un indicativo de desorganización y poco celo.

2ª) Existencias de errores aritméticos y de transcripción. Los errores aritméticos se producen tanto en cuentas formuladas de modo manual como por equipos informáticos y que, en ningún caso, se han salvado con la correspondiente diligencia de aclaración.

3ª) Diferencia entre el presupuesto preventivo de ingresos con el definitivo, por modificación de créditos iniciales.

Esta diferencia en los recursos definitivos implica una modificación del presupuesto preventivo de ingresos, que al no disponer de la información necesaria (presupuesto y modificaciones) en muchos casos, limita la comprobación de dichos aumentos de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 15 de Enero de 1980 sobre normas y formularios de cuentas, en relación a la procedencia de dichos aumentos.

En las previsiones de ingresos, modificables a partir de la resolución de la Dirección General de Administración Local (DGAL) de 15 de enero de 1980, se deberían incluir las alteraciones con repercusión en el presupuesto de gastos (partidas automáticamente ampliables o mayores ingresos utilizados para ampliar créditos de gastos).

4ª) Se producen excesos de ingresos, así como derechos no liquidados en el capítulo de resultas.

Las bajas en derechos reconocidos (resultas) aparecen como créditos no liquidados si no se ha adaptado el formato del modelo de la Resolución de la DGAL de 15 de Enero de 1980, y las altas deberían ser aplicadas a los conceptos presupuestarios del ejercicio corriente (ejercicio en que se liquida el derecho cualquiera que sea el periodo de que derive) por el principio de anualidad de ejecución.

De igual forma, las disminuciones en obligaciones reconocidas (resultas) indican que las relaciones de acreedores no se corresponden con los créditos pendientes de pago que figuran en la liquidación o, por el contrario, se derivan de créditos impersonales o globales que corresponden a servicios no prestados o adquisiciones no comprometidas.

De existir bajas, éstas deberían constar en expedientes realizados al efecto con indicación de sus causas, de conformidad con la legislación vigente.

5ª) Los créditos iniciales consignados en la liquidación de presupuesto no son coincidentes con los señalados en el presupuesto aprobado por la Corporación.

Puede suponer la no utilización de la columna de modificaciones por todas las causas en que éstas se han producido o existe una diferencia con el presupuesto inicialmente aprobado, que puede ser debida a un error en la transcripción de cifras o bien se trate de encubrir un exceso de obligaciones liquidadas sobre los créditos presupuestados.

6ª) No se ha podido contrastar la Cuenta General con el Presupuesto aprobado por la Corporación, por no disponerse de la documentación precisa.

2.2.- INCIDENCIAS PARTICULARES.

Una vez realizada una primera agrupación con las incidencias más generalizadas, se quiere hacer mención detallada de otras que siendo comunes, tienen una consideración especial, o que no siéndolo su importancia así lo aconseja.

2.2.1.- DIPUTACIONES.

Diputación de la Coruña:

Anula derechos en el capítulo 0 por 116.902.844 ptas. y obligaciones por 130.377.158 ptas. **Central de compras:** Presenta diferencias en los capítulos 8 y 9 de ingresos y gastos con relación al presupuesto inicialmente aprobado. **Sanatorio psiquiátrico de Conjo:** Presenta diferencias en el capítulo 6 de gastos y en los 4 y 8 de ingresos. No presenta columna de modificaciones en el estado de ingresos. **Hospital médico-quirúrgico:** Anula derechos reconocidos en resultas por 5.686.893 ptas. y gastos por 599.785 ptas.

Diputación de Lugo:

Presenta un exceso de ingresos en resultas por 132.454 ptas. y anula obligaciones por 94.947.683 ptas. Diferencia de Previsiones Iniciales en los capítulos 7 y 9 de ingresos y 6 de gastos.

Diputación de Pontevedra:

En resultas anula derechos por 36.561.533 ptas. y obligaciones por 176.229.400 ptas.

2.2.2.- AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 20.000 HABITANTES.

Provincia de la Coruña:

Carballo: Anula derechos reconocidos por 18.840.783 ptas. y cierra el ejercicio con un déficit de 10.828.183 ptas. **A Coruña:** El resumen por capítulos de la liquidación no se ajusta al formulario aprobado por la Resolución de 15 de enero de 1980. Anula derechos reconocidos por 205.914.453 ptas. **Ferrol:** Anula derechos por 33.512.141 ptas. y obligaciones por 87.274.930 ptas. **Narón:** Presenta exceso de liquidación sobre el crédito en el capítulo 8 del presupuesto de gastos y no refleja correctamente los derechos reconocidos y liquidados. **Santiago:** Presenta un déficit inicial en el presupuesto de 1.255.855.578 ptas. , anula derechos reconocidos por 23.633.327 ptas., lo que implica la existencia de un déficit procedente de resultas.

Provincia de Lugo:

Lugo: Anula derechos por 242.726.333 ptas. y obligaciones por 59.286.513 ptas. **Monforte:** Presenta errores en la suma de las previsiones iniciales y las modificaciones de los capítulos de ingresos 3-4-5 y 7.

Provincia de Pontevedra:

Cangas: Anula derechos por 31.728.645 ptas. y obligaciones por 6.012.386 ptas. En la confección del presupuesto de 1990 se observa un déficit de 94.843.568 ptas., cuando el déficit contable de 1989 es de 64.611.372 ptas., cerrando 1990 con un déficit de 32.746.283 ptas. **A Estrada:** Anula derechos por 133.487.373 ptas. y obligaciones por 123.762.586 ptas. Considerando que cierra 1989 con un superávit contable de 7.839.823 ptas., dichas correcciones en resultas implican un déficit real a 31-12-89 de 1.884.964 ptas. **Pontevedra:** Errores en las columnas del estado de ejecución por defectos de programación. Anula derechos por 372.042.946 ptas. y obligaciones por 32.412.635 ptas. **Vigo:** No se ajusta la estructura de la liquidación al formulario oficial aprobado por la Resolución de la Dirección de Administración Local de 15-01-80. **Villagarcía:** En el capítulo I de ingresos aparecen restos por cobrar con signo negativo por 30.825.319 ptas. por la realización de un asiento contable incorrecto.

2.2.3.- AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN COMPRENDIDA ENTRE 5.000 Y 20.000 HABITANTES

Relación de Ayuntamientos que presentan altas y bajas en resultas que, por ser significativas, deberían remitir los expedientes correspondientes.

AYUNTAMIENTO	BAJA EN DERECHOS	BAJAS EN OBLIGACIONES	EXCESO EN INGRESOS
ARTEIXO	65.136.768	29.298.939	....
BERGONDO	1.767.930	6.472.973	....
CERCEDA	36.134.763	59.606.879	3.122
CORISTANCO	15.425.579	1.589.200	10.847.110
CULLEREDO	10.839.162	—	—
DUMBRIA	3.416.920	13.238.257	....
FENE	3.014.866	13.008.856	—
MAZARICOS	.....	.....	25.297.442
MELIDE	35.041.545	4.235.696	6.402.625
OUTES	28.646.004	25.783.353	—
(Anula todos los restos por cobrar y por pagar)			
SADA	9.121.298	—	—

Provincia de la Coruña:

A Baña: Diferencia en crédito inicial capítulo 9 de gastos. **Betanzos:** La estructura de la Liquidación y Cuenta General no se adapta a la establecida en la Regla 76 de la Instrucción de Contabilidad y a la Resolución de la DGAL de 15 de enero de 1980. **Brión:** Diferencia en crédito inicial, capítulo 1 de gastos. **Laracha:** Diferencia en crédito inicial, capítulos 1, 2, 4 y 6 de gastos. **Mazaricos:** Diferencia en crédito inicial, capítulo 6 de gastos. **Noia:** Diferencia en crédito inicial, capítulo 2 de gastos. **Outes:** Diferencia en crédito inicial, capítulo 9 de gastos. **Poboa do Caramiñal:** No se consideran los reintegros de pagos en los capítulos 2 y 4 para el cálculo de los pagos líquidos u obligaciones satisfechas.

Provincia de Lugo:

Foz: Diferencia entre previsiones iniciales en ingresos en los capítulos 4 y 7 y la previsión definitiva no coincide con la inicial más las modificaciones. **Guitiriz:** Existen diferencias entre el presupuesto inicial y el definitivo, en gastos, por importe de 51.722.562 ptas., y en ingresos, por importe de 19.547.125 ptas., cuando no constan modificaciones presupuestarias. **Mondoñedo:** Incorporan todas las resultas al ejercicio corriente, aprobándose el presupuesto inicial con un superávit de 8.418.817 ptas. **Sarria:** Se sobrepasa el límite de crédito presupuestado en el capítulo 2 de gastos (partida 2200121) apareciendo en el estado de ejecución un rebasamiento de crédito, incumpliéndose así el carácter limitativo que impone la Ley (artículos 448.1 TRRL y 143 LRHL).
O Saviñao: Diferencia entre créditos iniciales de los capítulos 3, 7 y 8 de ingresos. **Villalba:** Diferencia en crédito inicial capítulo 8 de gastos e ingresos, no constan movimientos en el estado de modificaciones. **Viveiro:** El estado de ejecución no coincide con la liquidación, compensándose diferencias en más y en menos. Diferencia en crédito inicial capítulo 1 y 2 del presupuesto de gastos y capítulo 7 y 8 de presupuesto de ingresos.

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, así como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios cerrados, cuando sus importes son significativos.

AYUNTAMIENTO	EXCESO DE INGRESOS	ANULACION INGRESOS	ANULACION GASTOS
CHANTADA	13.831.293	605.419	—
FONSAGRADA	62.321	754.982	10.647.597
FOZ	....	876.782	—
FRIOL	207.807	....	....
GUITIRIZ	....	3.046.081	....
QUIROGA	...	282.589	2.747.754
RIBADEO	3.510.093	12.238.367	4.200.614
SARRIA	64.586.212	1.908.319	3.108.993
O SAVIÑAO	1.468.600	867.502	882.162
VILALBA	387.140	2.441.437	—
VIVEIRO	....	5.826.869	1.617.153

Provincia de Orense:

Carballiño: Presenta una diferencia de créditos iniciales en los capítulos 1 y 2 del presupuesto de ingresos. El capítulo 1 se aminora en 31.000.000 ptas. y se incrementa el capítulo 2 en la misma cuantía.

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, así como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios cerrados, cuando sus importes son significativos.

AYUNTAMIENTO	EXCESO DE INGRESOS	ANULACION INGRESOS	ANULACION GASTOS
CARBALLIÑO	13.024.936	11.135.470	—
A RUA	31.663	5.648.876	9.882.782
VERIN	120.665	4.513.687	51.627

Provincia de Pontevedra:

Bueu: Se registra un déficit presupuestario de 19.139.287 ptas., hay una modificación en resultas de ingresos por 3.127.471 ptas., se anulan derechos por 13.637.064 ptas. y se cierra con un déficit de 48.288.767 ptas. **Gondomar:** Se produce una modificación negativa (38.208.103 ptas.) que no se traslada a la previsión definitiva. **Meis:** Se arrastra un déficit presupuestario de 7.160.806 ptas. y se cierra el ejercicio con un déficit de 1.797.342 ptas. **Moraña:** Incorpora las resultas con un déficit de 13.693.508 ptas. **Mos:** Se recoge en el Resumen por Capítulos de Ingresos "Reintegro de Gastos" (43.540 ptas.) y en Gastos "Devolución de Ingresos indebidos" (89.125 ptas.). **Porriño:** En el Presupuesto de Gastos hay modificaciones en Resultas (aumento y baja).

2.2.4.- AYUNTAMIENTOS MENORES DE 5.000 HABITANTES

Provincia de la Coruña:

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, así como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios cerrados, cuando sus importes son significativos.

AYUNTAMIENTO	EXCESO DE INGRESOS	CREDITOS LIQUIDADOS	ANULACIONES DE GASTOS
ARES	....	4.207.372	4.166.098
BOIMORTO	164.254	....	....
BOQUEIXÓN	....	12.934	1.465.132
CERDIDO	100.934	202.081	274.042
COIROS	2.025.470	253.574	—
CORCUBIÓN	2.177.069	....	—
CURTIS	....	33.400.437	3.884.804
DODRO	302.422	....	—
FRADES	3.038.306	1.518.202	1.961.448
LOUSAME	199.232	....	—
MESÍA	20.961	3.226	2.112.999
OROSO	....	3.270.482	509.792
AYUNTAMIENTO	EXCESO DE INGRESOS	CREDITOS LIQUIDADOS	ANULACIONES DE GASTOS
OZA DOS RIOS	....	22.800.000	22.879.707
SAN SADURNIÑO	1.170.103	458.902	590.458
SANTISO	....	132.744	535.729
SOBRADO	3.251.166	....	—
TOQUES	260.277	....	—

Provincia de Lugo:

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, así como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios cerrados, cuando sus importes son significativos.

AYUNTAMIENTO	EXCESO DE INGRESOS	CREDITOS LIQUIDADOS	ANULACIONES DE GASTOS
BALEIRA	717.492	....	....
BARALLA	73.695	585.617	1.009.125
BARREIROS	....	4.885.049	5.133.670
BÓVEDA	....	15.409.019	14.993.328
GUNTÍN PALLARÉS	908.500	—	—
MEIRA	135.735	....	—
MONTERROSO	2.374.463	....	....
PANTÓN	....	10.838.300	3.466.688
PARADELA	....	....	1.359.724
PÁRAMO	619.890	....	—
PEDRAFITA	....	8.534.546	640.176
POL	201.665	—	—
A PONTENOVA	3.299.490	359.328	795.167
PORTOMARÍN	4.721.576	....	—
VICEDO	2.700.668	....	8.972.418
XOVE	72.930.093	6.848.082	11.987.393

Provincia de Pontevedra:

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, así como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios cerrados, cuando sus importes son significativos.

AYUNTAMIENTO	EXCESO DE INGRESOS	CREDITOS LIQUIDADOS	ANULACIONES DE GASTOS
ARBO	2.136.336	---	---
BARRO	425.767	34.495	2.327.464
CATOIRA	88.679	3.298.374	1.172.356
CRECENTE	114.778	3.888.883	---
DOZÓN	---	1.532.147	1.607.400
FORNELOS DE MONTES	895.418	---	---
A LAMA	76.527	498.716	133.004
MONDARIZ BALNEARIO	265.275	26.425	318.537
OIA	---	5.695.010	11.158.839
PORTAS	91.852	294.719	395.665
RIBADUMIA	---	---	3.874.249
RODEIRO	1.161.397	596.707	1.311.516

2.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO

1º) La liquidación de derechos está por debajo de la media de la Comunidad (97%) en las Diputaciones (93%), sobrepasándose en los Ayuntamientos, sobre todo en los del grupo IV (107%), lo que determina una moderación en la previsión de ingresos.

2º) Las obligaciones reconocidas se encuentran en la media de la Comunidad (89%) sobrepasándose en los Ayuntamientos del grupo IV (91%).

3º) La ejecución en los contraídos de ingresos supera la media de la Comunidad (69%) en Ayuntamientos y Diputaciones a excepción del grupo II (61%) y se supera ampliamente en el grupo IV (80%).

4º) El índice de pagos supera igualmente la media de la Comunidad (66%) a excepción de los Ayuntamientos del grupo II (63%).

El análisis conjunto de estos cuatro índices conduce a afirmar que los Ayuntamientos del grupo IV son los que mantienen un mejor nivel de ejecución de presupuesto así como de tesorería, siendo los más bajos los del grupo II (presupuestos menos realizables y nivel de cobranza y pagos por debajo de la media de la Comunidad, en definitiva, y por consiguiente, presentarán mayores problemas de tesorería).

5º) El endeudamiento sólo está por encima de la media de la Comunidad (19,09%) en las Diputaciones (31,20%), las cuales además rebasan el límite legalmente establecido (30%). Dicho nivel de endeudamiento va en escala decreciente de Ayuntamientos mayores a menores II (17,46%), III (11,86%) y IV (6,65%), siendo los menos endeudados los del grupo IV. Este índice de endeudamiento implica un reparto similar de las cargas financieras por habitante.

6º) En gastos de personal todos están en la media de la Comunidad (46%), a excepción del grupo IV que se encuentra por debajo de la misma (41%); observándose además que este índice ha descendido con relación a años anteriores, a excepción de las Diputaciones, en donde el gasto por habitante ha aumentado.

De datos obtenidos en otras Comunidades se puede establecer el 45 % como promedio, con lo que se deduce que la Comunidad Autónoma está ligeramente por encima del mismo.

7º) El índice de inversiones se encuentra en el 26 % siendo superado por los ayuntamientos del grupo III y IV y no alcanzándolo las Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

8º) La media de presión fiscal de las Corporaciones Locales se encuentra en 19.408 ptas/habitante, siendo ampliamente superado en los Ayuntamientos del grupo II (27.740 ptas.) y sensiblemente inferior en los del grupo III (12.088 ptas.) y grupo IV (6.916 ptas.).

Aunque en relación a 1988 ha sufrido un elevado incremento para los grupos III (51%) y IV (60%).

En relación a la presión fiscal se debe tener en cuenta que el alto grado de ejecución de ingresos y por tanto del índice de tesorería en los Ayuntamientos del grupo IV viene dado por la baja presión fiscal, al financiar un presupuesto de ingresos en gran medida por transferencias (Fondo de Cooperación Local y Subvenciones).

9º) En la inversión por habitante se observa que la de los Ayuntamientos más pequeños (grupo IV) son los que más reciben en relación al esfuerzo fiscal que soportan (10.546 ptas.), no obstante, es muy bajo en relación a otras Comunidades Autónomas (63.732 ptas. Canarias), y que el promedio de la Comunidad se encuentra en 17.668 ptas/habitante (Ayuntamientos más Diputaciones).

10º) En el gasto de personal por habitante se observa que los Ayuntamientos del grupo II duplican a los de grupo IV, y que el crecimiento de estos últimos entre 1988 y 1990 se sitúa en el 52,8 %.

11º) El índice de solvencia se encuentra por debajo de la media de las Entidades Locales (1,32%), en las Diputaciones (1,21%), y Ayuntamientos del grupo III (1,29%).

Los índices de tesorería y solvencia representan la situación de la entidad ante sus acreedores.

Así se observa que por cada 100 ptas. de deuda las entidades locales disponen de una parte en efectivo (tesorería) y otra de realizable (deudores) para hacerle frente.

GRUPO	I	II	III	IV
EFECTIVO	38	20	31	78
REALIZABLE	83	120	98	83
SOLVENCIA	121	140	129	161

3.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS

3.1.- FISCALIZACIONES EFECTUADAS

A) A nivel provincial la fiscalización efectuada ha sido:

COBERTURA	TOTAL (*) CORPORACIONES	CORPORACIONES REVISADAS	% S/ TOTAL
LA CORUÑA	94	86	91,49%
LUGO	66	52	78,79%
ORENSE	92	74	80,43%
PONTEVEDRA	61	43	70,49%
DIPUTACIONES	4	4	100,00%
TOTALES	317	259	81,70%

(*) Incluye solamente Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

B) El alcance por grupos dentro de cada provincia ha sido el siguiente:

GRUPOS	AYUNTAMIENTOS FISCALIZADOS	TOTALES AYUNTAMIENTOS	% S/TOTAL
LA CORUÑA			
GRUPO 2	6	6	100,00%
GRUPO 3	53	57	92,98%
GRUPO 4	27	31	87,10%
TOTALES	86	94	91,49%
LUGO			
GRUPO 2	2	2	100,00%
GRUPO 3	15	17	88,24%
GRUPO 4	35	47	74,47%
TOTALES	52	66	78,79%
ORENSE			
GRUPO 2	1	1	100,00%
GRUPO 3	7	8	87,50%
GRUPO 4	66	83	79,52%
TOTALES	74	92	80,43%
GRUPOS	AYUNTAMIENTOS FISCALIZADOS	TOTALES AYUNTAMIENTOS	% S/TOTAL
PONTEVEDRA			
GRUPO 2	8	8	100,00%
GRUPO 3	21	34	61,76%
GRUPO 4	14	19	73,68%
TOTALES	43	61	70,49%

C) Limitaciones al alcance.

En el desarrollo del examen de las cuentas se han producido limitaciones al alcance de la fiscalización, originadas, fundamentalmente, por falta de documentación o por rendición de la misma de forma incompleta.

a) Corporaciones que no han rendido cuentas:

Provincia de La Coruña: Cariño, Carral, Muxía, Outes, Curtis, Oroso y San Sadurniño.

Provincia de Lugo: Taboada, O Corgo, Lourenzá, Paradela, Páramo, Poboa de Brollón, Triacastela y Barreiros.

Provincia de Orense: Barbadás, A Merca, A Porqueira, A Teixeira, Toén y Cartelle.

Provincia de Pontevedra: Meis, Nigran, Sanxenxo y Campo Lameiro.

b) Las Corporaciones que han rendido parcialmente las Cuentas del año 1990 y documentación anexa, fueron un total de 101, distribuidas de la siguiente forma:

Ayuntamientos menores de 5.000 H.	42
Ayuntamientos entre 5.000 y 20.000 H.	49
Ayuntamientos superiores a 20.000 H y Diputaciones Provinciales	10
TOTAL	101

3.2.- ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

Con las anomalías descubiertas, se envió a cada Entidad fiscalizada el correspondiente informe, para que en aquellos casos que procediera se enviase documentación justificativa de determinados aspectos.

Una vez analizadas las alegaciones recibidas de cada Entidad, los reparos más significativos, sin justificar, han sido:

1. Aplicación de dos estructuras presupuestarias distintas entre el Presupuesto Preventivo de Ingresos y el de Gastos, o bien en el Presupuesto Preventivo y la Cuenta General.

2. Diferencias entre las bajas reflejadas en la Liquidación presupuestaria y los certificados de bajas por derechos y obligaciones reconocidas.

3. Diferencias sin justificar entre consignación inicial en el presupuesto de gastos y la Cuenta General.

4. Incorporación como remanentes de crédito de los componentes de remanentes de Tesorería, con anulación de resultas.

5. Presupuestos del año 1990 aprobados fuera de plazo.

6. Existencia de mayores derechos liquidados e ingresados que los previstos en resultas de ingresos.

7. Carencia de alguno de los requisitos exigidos por el artículos 158 de la Ley 39/88 o 445 del RDL 781/86 (fundamentalmente referido a la información sobre la financiación de las modificaciones de crédito o por confusión en las fuentes de financiación).

8. Financiación de las modificaciones inexistentes o sin justificar, así como altas y bajas sin justificar.

9. Ampliaciones en partidas sin cumplir el artículo 159 de la Ley 39/88.

10. Ampliaciones de crédito en partidas ampliables superiores al importe de la ampliación en el respectivo concepto de ingresos, o sin justificar debido a utilizar como ampliación la consignación inicial de ingresos.

11. Transferencias de crédito (minoración) en partidas de resultas.

12. Ampliaciones de crédito en partidas de resultas (recogido adicionalmente en las Bases de Ejecución).

13. Incumplimiento del artículo 161 de la Ley 39/88.

14. Incumplimiento del artículo 160.2 de la Ley 39/88.

15. Entrada en vigor de los expedientes de modificación posteriormente al año 1990.

16. Modificaciones aprobadas antes de aprobar el presupuesto de 1990.

17. Los expedientes de modificación incumplen conjuntamente los requisitos de información y publicación.

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Madrid, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.	12	12	--
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes.	26	23	3
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.	140	9	42

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

Como esta Comunidad Autónoma es de carácter uniprovincial, no tiene Diputación Provincial, por lo que no figura en el cuadro del apartado anterior el estrato del Grupo A).

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye 47 municipios y reúne 4.817.178 habitantes.

En ingresos destacan los previstos por transferencias corrientes, que suponen el 31 %, seguidos de los impuestos directos con un 29 %, correspondiendo el 40 % al resto de los recursos previstos por las Corporaciones, amortizaciones (el 17 %), tasas y otros ingresos (el 12 %) y a los demás capítulos presupuestarios (el 11 %).

En cuanto a los gastos, las operaciones corrientes suponen el 71 % y las de capital el 24 %, quedando el 5 %, en su casi totalidad, para la amortización de las operaciones financieras.

Las resultas de ejercicios cerrados equivalen, en ingresos, al 33 % y, en gastos, al 29 % sobre el total del presupuesto refundido inicial.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 164.678 millones de pesetas, que suponen el 42 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones representa un 59 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones de crédito, superiores al 25%, se consideran elevadas.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a inversiones reales, por el 15%, y a compra de bienes y prestación de servicios, por el 73%.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El contraído de los derechos por operaciones corrientes es el 58 % de los totales, correspondiendo un 5 % a los procedentes de operaciones de capital y un 37 % a los de operaciones financieras.

El contraído de las obligaciones por operaciones corrientes supone el 51 % del total, destinándose el 13 % a operaciones de capital y el 36 % restante a las financieras, principalmente para amortizar los pasivos pendientes.

De los ingresos corrientes, el mayor peso es el de las transferencias, con el 23 % del contraído de ingresos de los procedentes de la gestión tributaria, que supone el 33 %. En cuanto a los ingresos de capital, los mayores proceden de pasivos financieros, que suponen el 37 %.

En cuanto a los gastos corrientes, el mayor porcentaje corresponde a los de personal, con el 24 %. En los gastos de capital, el mayor corresponde a operaciones financieras, con el 36 %, las compras corrientes suponen el 17 % y las inversiones el 11 %.

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de la liquidación del presupuesto tienen un superávit de 64.492 millones de pesetas. Este superávit no resulta significativo por contar con unos derechos pendientes de cobro por importe de 137.976 millones de pesetas, que suponen el 86 % del total de las resultas de ingresos y suelen presentar dificultades para su realización por la falta de depuración de los valores de dudoso cobro. El desglose de este resultado es el siguiente:

Por resultas de ejercicios cerrados	23.535 millones de ptas.
Por ejercicio corriente	40.956 millones de ptas.
Suma (superávit)	64.491 millones de ptas.

e) Indicadores significativos.

- La formación bruta del capital se ha elevado a 31.626 millones de pesetas.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados exceden a las obligaciones reconocidas en 4.910 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, representaron el 26 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido positiva, por importe de 904 millones de pesetas, y la variación neta de pasivos financieros se elevó a 18.570 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos han rendido esta cuenta, pero no consta su aprobación en:

- Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

No han rendido esta cuenta los Ayuntamientos de:

- Colmenar de Oreja, Boadilla del Monte y Humanes.

No consta la aprobación de esta cuenta en los Ayuntamientos de:

- Aranjuez, Ciempozuelos, Galapagar, Majadahonda, Rivas-Vaciamadrid y Villaviciosa de Odón.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Se han examinado las cuentas de nueve Ayuntamientos.

No consta la aprobación de las cuentas en:

- Belmonte de Tajo, Fuentidueña del Tajo, Hoyo de Manzanares y Moralzarzal.

3.1.2.- Cuenta de Administracion de Patrimonio

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

No han remitido esta cuenta:

- Alcobendas, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Parla y San Sebastián de los Reyes.

Todas las Corporaciones que han remitido la cuenta la han aprobado.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

No han enviado esta cuenta los Ayuntamientos de:

- Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja, Humanes de Madrid, Algete, Ciempozuelos, Collado-Villalba, Colmenar Viejo, El Escorial, Guadarrama, Majadahonda, Valdemoro y Villaviciosa de Odón.

No consta la aprobación de esta cuenta en los Ayuntamientos de:

- Galapagar, Rivas-Vaciamadrid y San Lorenzo del Escorial.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todas las Corporaciones envían esta cuenta, pero no consta su aprobación en las de:

- Alcorcón, Coslada, Leganés y Móstoles.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

No han enviado esta cuenta los Ayuntamientos de:

- Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja, Humanes de Madrid, Galapagar, Majadahonda y San Lorenzo del Escorial.

No consta su aprobación en las siguientes Corporaciones:

- Ciempozuelos, Collado-Villalba, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid y Valdemoro.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

No consta la aprobación de esta cuenta en los Ayuntamientos de:

- Leganés y Móstoles.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

No han enviado esta cuenta los Ayuntamientos de:

- Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja, Humanes de Madrid, Majadahonda, San Lorenzo del Escorial, Ciempozuelos, El Escorial, Galapagar, Pozuelo de Alarcón y Rivas-Vaciamadrid.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. No existe coincidencia de saldos finales a 31 de diciembre de 1989 con los iniciales a 1 de enero de 1990.

En cuanto a Caja, en los Ayuntamientos de:

- Rivas-Vaciamadrid, Collado-Mediano, Morajela de Enmedio y Moralzarzal.

En cuanto al pendiente de cobro, en:

- Rivas-Vaciamadrid, Valdemoro, Chinchón y Moralzarzal.

En cuanto al pendiente de pago, en:

- Mejorada del Campo y Rivas-Vaciamadrid

3.2.2. Los gastos corrientes en presupuesto inicial son mayores que los ingresos corrientes.

- En Torrejón de Ardoz el exceso de gastos corrientes sobre los ingresos de igual carácter supone el 1 % del presupuesto inicial de ingresos (capítulos 1-9).

Otros cuatro Ayuntamientos presentan idéntica situación:

	% sobre Pto. inicial ingresos (1-9)
- Gascones	33
- La Serna del Monte	13
- Fuentidueña del Tajo	3
- Villavieja de Lozoya	18

3.2.3. Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el art. 452 del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una constante en la legislación de las Haciendas Locales y ha sido confirmada en el art. 146 de la Ley 39/1988, reguladora de las mismas.

En los Ayuntamientos que se indica, se ha producido el déficit inicial en porcentaje que se señala.

- Leganés, 1 % sobre el presupuesto refundido (capítulos 0-9) de gastos.

- Aranjuez, 1 % sobre el presupuesto refundido (capítulos 0-9) de gastos.

- Ciempozuelos, 2 % sobre el presupuesto refundido (capítulos 0-9) de gastos.

3.2.4. Las obligaciones reconocidas superan los créditos consignados.

Se señalan, junto a cada Corporación, las cantidades en que se han excedido y los capítulos afectados por dicha anomalía.

- Móstoles 11 millones de pesetas (capítulo 3).
- Coslada 35 millones de pesetas (capítulo 8).
- Torrejón de Ardoz 1 millón de pesetas (capítulo 3).
- Ciempozuelos 237 millones de pesetas (capítulos 0,1,2,4,8 y 9)
- Navalcarnero 7 millones de pesetas (capítulos 1,2,3 y 8)
- Rozas de Puerto Real 0,57 millones de pesetas (capítulos 2,3,6 y 9)

3.2.5. Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como gastos vinculados a estos recursos, en los Ayuntamientos siguientes:

- Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla y San Sebastián de los Reyes.

- Algete, Aranjuez, Arganda, El Escorial, Guadarrama, Navalcarnero, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrelodones y San Martín de Valdeiglesias.

3.2.6. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deben comprobar la posible existencia de valores prescritos susceptibles de ser dados de baja en las cuentas. Afecta esta situación a:

- Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe y Parla.
- Aranjuez, Collado-Villalba, Colmenar Viejo, Las Rozas, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega y Villaviciosa de Odón.
- Chinchón.

3.2.7. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, provocando desa-

justes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al anotar la contratación de nuevos préstamos. Así ocurre en:

- Alcalá de Henares, Coslada, Getafe y Madrid.
- Arganda, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, San Lorenzo del Escorial, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias y Torrelodones.
- Chinchón.

3.2.8. Carencia de información sobre la recaudación, por no rendir cuentas los Recaudadores de la Corporación o los Servicios de Recaudación autonómicos, que prestan éste a los Ayuntamientos. Están en este caso:

- Leganés y Torrejón de Ardoz.
- Algete, El Escorial, Galapagar, Majadahonda, Pinto y San Lorenzo del Escorial.
- Hoyo de Manzanares.

3.2.9. Documentación incompleta en la liquidación de presupuesto. Afecta a:

- Coslada.
- Navalcarnero, Rivas-Vaciamadrid, Pozuelo de Alarcón y Collado-Villalba.
- Chinchón y Torres de la Alameda.

3.2.10. En la Cuenta de Administración de Patrimonio no hay coincidencia entre los saldos finales a 31 diciembre de 1989 y los iniciales a 1 de enero de 1990. Están en esta situación:

- Coslada y Madrid.
- Mejorada del Campo, Navalcarnero, San Martín de la Vega y San Martín de Valdeiglesias.
- Chinchón.

Son, pues, 7 de un total de 48, lo que supone el 15 %

No han enviado la Cuenta de Patrimonio:

- Hoyo de Manzanares y Torres de la Alameda.

No consta tengan aprobado el Inventario:

- Batres, Collado-Mediano y Moralzarzal.

3.2.11. En la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto se han registrado, con independencia de la contabilización defectuosa de subvenciones, operaciones de naturaleza presupuestaria que debieron haberse formalizado en el presupuesto.

Son los tres Ayuntamientos que se citan los afectados por esta práctica irregular, que suponen el 6 % del total de 48 cuentas examinadas:

- Coslada.
- San Martín de Valdeiglesias.
- Chinchón.

3.2.12. En la Cuenta de Tesorería no han incorporado al expediente el acta de arqueo a 31 de diciembre de 1990:

- Torrejón de Ardoz.
- El Escorial, Majadahonda, Rivas-Vaciamadrid y San Lorenzo del Escorial.
- Hoyo de Manzanares

Presentan una conciliación insuficiente de saldos de Tesorería y los extractos bancarios, los 15 Ayuntamientos que se citan a continuación:

- Alcobendas, Alcorcón y Móstoles.
- Las Rozas, Ciempozuelos, Galapagar, Guadarrama, Pinto, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones.
- Collado-Mediano, Gascones, Moralzarzal, La Serna del Monte y Torres de la Alameda.

COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Murcia, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.	3	3	-
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes.	32	29	3
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.	10	1	1

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el presente análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

Como esta Comunidad Autónoma es de carácter uniprovincial, no tiene Diputación Provincial, por lo que no figura en el cuadro del apartado anterior el estrato del Grupo A).

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye 32 municipios y comprende 985.691 habitantes.

De los tres grupos de municipios analizados destaca el formado por los mayores de 50.000 habitantes, que, con sólo tres Ayuntamientos, Murcia, Cartagena y Lorca, representa el 62 % de los presupuestos totales y agrupa el 57 % de la población.

En cuanto a los ingresos, puede señalarse que la demanda de capital prevista en operaciones financieras asciende al 17 % de los ingresos del ejercicio corriente y las transferencias esperadas el 35 %, representando un 48 % los recursos aportados directamente por los municipios.

En cuanto a los gastos, los de operaciones corrientes representan el 71 % del total previsto y los de capital al 23 %, destinándose el 6 % restante a las operaciones financieras.

Debe señalarse el elevado porcentaje de las resultas de ejercicios cerrados, que ascienden, tanto en ingresos como en gastos, al 38 % del presupuesto refundido, lo que muestra un bajo nivel de realización efectiva de los presupuestos de ejercicios anteriores.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 8.422 millones de pesetas, que suponen el 12 % de los créditos iniciales del agregado de los presupuestos refundidos. El importe de estas modificaciones representa un 19 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a operaciones financieras, por el 39 %, a inversiones reales, por el 33 %, y a compra de bienes y prestación de servicios, por el 17%.

Destaca el Ayuntamiento de Cieza, en el que las modificaciones de crédito suponen el 105 % de los créditos iniciales (capítulos 1 a 9), debido a la iniciación de nuevas obras, no previstas en presupuesto, a reintegro de préstamos y aumentos en los gastos de los servicios, por cuantía bastante superior al presupuesto inicialmente aprobado.

c) Liquidación y reconocimiento de los derechos y obligaciones.

La liquidación de los derechos por operaciones corrientes ascendió al 71 % de los ingresos totales, correspondiendo un 10 % a los procedentes de operaciones de capital y un 19 % a los de operaciones financieras.

El reconocimiento de las obligaciones por operaciones corrientes supuso el 66 % del total, destinándose el 22 % a operaciones de capital y el 12 % restante a las financieras, para amortizar los pasivos pendientes, esencialmente.

En los Ayuntamientos de Archena y Torrepacheco, los ingresos por operaciones corrientes son el 82 y el 75 % de los ingresos totales, respectivamente. Los gastos por operaciones corrientes supusieron el 74 y 62 % de los gastos totales.

Debe señalarse el alto porcentaje de ingresos que corresponde a operaciones corrientes, con los que se financian la totalidad de los gastos corrientes y parte de los restantes.

d) Resultados de la liquidación del presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos registran un superávit de 1.038 millones de pesetas. Esta cifra debe considerarse con cierta reserva, pues en su obtención han intervenido derechos pendientes de cobro por importe de 25.083 millones de pesetas y su realización efectiva puede presentar ciertas dificultades para materializarse. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	120 millones de ptas.
- Por ejercicio corriente	918 millones de ptas.
Suma (superávit)	1.038 millones de ptas.

e) Indicadores significativos.

- La formación bruta de capital ha sido de 9.137 millones de pesetas, esto es, un 12 % del gasto total en el ejercicio.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 3.560 millones de pesetas de inversión.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, representaron el 34 % de los ingresos del ejercicio corriente.

- La variación neta de activos financieros ha sido negativa (desinversión) de 15 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros, positiva (aumento del endeudamiento) en 3.413 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta en los tres Ayuntamientos incluidos en el grupo y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, a excepción del Ayuntamiento de Lorca, del que no consta su aprobación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes

Los 29 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 21 casos, no constando su aprobación en los 8 restantes (Totana, Alcantarilla, Ceutí, Torrepacheco, Fortuna, Beniel, Mazarrón y Moratalla).

Municipios con población inferior o igual a 5.000 habitantes.

El Ayuntamiento examinado de este grupo ha rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en todos los Ayuntamientos incluidos en el grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

De los 28 Ayuntamientos que forman el grupo han rendido esta cuenta 21, quedando 7 pendientes de cumplimentar este trámite (Alcantarilla, Yecla, Fortuna, Moratalla, La Unión, Beniel, y Cehegín).

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, todas, excepto 4 (Torrelaguna, Alguazas, Mazarrón y Ceutí).

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de los tres Ayuntamientos que forman el grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran el grupo, con la excepción de Yecla. Asimismo ha sido aprobado por el Pleno en todos los casos, excepto en dos (Las Torres de Cotillas y Fortuna).

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos del colectivo han rendido esta cuenta, que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos del grupo han rendido esta cuenta, pero no consta que haya sido aprobada en los siete siguientes: Aguilas, Alcantarilla, Mazarrón, La Unión, Moratalla, Cehegín y Ceutí.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. No coinciden los saldos finales a 31 de diciembre de 1989 con los iniciales a 1 de enero de 1990 en las Cuentas de Presupuesto, en lo referente a los créditos pendientes de cobro y de pago, en los Ayuntamientos de Alcantarilla y Cartagena.

3.2.2. Los gastos por operaciones corrientes en el presupuesto inicial son mayores que los ingresos por operaciones corrientes en las cuentas de los Ayuntamientos de Ceutí y Moratalla.

3.2.3. Al incorporar al presupuesto del ejercicio corriente las resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones hayan aprobado las medidas previstas en el art. 452 del Real Decreto Legislativo 781/1986, para conseguir restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario ha sido una constante en la legislación de las Haciendas Locales y se ha confirmado en el art. 146 de la Ley 39/1988, reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en ocho Ayuntamientos (Cartagena, Caravaca, Abarán, Abanillas, La Unión, Mula, Archena y Puerto Lumbreras).

3.2.4. Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos. Se tratan como operaciones extrapresupuestarias las que son de naturaleza presupuestaria.

Esta anomalía es, con gran diferencia, la más frecuente en esta Comunidad, ya que se registra en 21 de las 32 cuentas examinadas (el 65 % del total).

3.2.5. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años en ocho Corporaciones (Totana, Yecla, Alcantarilla, Fuente Alamo, San Pedro del Pinatar, Santomera, Fortuna y Torre Pacheco).

3.2.6. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo a las operaciones registradas, según los casos, y se provocan desajustes entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Estas anomalías se observan en 15 de las cuentas examinadas (el 47 % del total).

3.2.7. Se carece de información sobre la recaudación, bien porque no lo hacen los Recaudadores de la Corporación o los Servicios de Recaudación autonómicos, que cumplen esta función para los Ayuntamientos.

Estas modalidades de irregularidades se observan en 4 Ayuntamientos, en periodo voluntario, y en 7 Ayuntamientos, en periodo ejecutivo, lo que, en total, supone el 34 % del colectivo examinado.

3.2.8. No ha sido informada la Cuenta General de Presupuesto por la Comisión Especial de Cuentas en cinco Ayuntamientos (Lorca, Alcantarilla, Beniel, Ceutí y Fortuna).

3.2.9. No coinciden los saldos finales del activo y del pasivo de la Cuenta de Administración de Patrimonio, en 1989, con los iniciales de la Cuenta de 1990 en ocho Ayuntamientos (Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Totana, Puerto Lumbreras, Archena, Santomera y Calasparra).

3.2.10. No se han remitido al Tribunal las notas o extractos de situación de las cuentas bancarias, a 31 de diciembre de 1990, justificativas de las actas de arqueo a esa misma fecha, y, en su caso, las correspondientes conciliaciones, de seis Ayuntamientos (Alcantarilla, Fortuna, Archena, Mazarrón, Ceutí y Moratalla).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

1.- INTRODUCCIÓN.

El presente apartado se estructura en tres partes; en la primera, se ofrece una visión general del mapa municipal de Navarra; en la segunda, se presenta una síntesis de la opinión y de las recomendaciones generales derivadas de los trabajos de fiscalización realizados en 1990, de acuerdo con el Programa Anual y, por último, en el tercer apartado, se ofrece información estadística sobre la liquidación de los presupuestos de 1990 de las Entidades Locales de Navarra, facilitada por el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra.

2.- ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DE NAVARRA.

La población de la Comunidad Foral se reparte en un total de 266 municipios, con una media poblacional de 1.968 habitantes.

Por estratos de población, estos municipios se distribuyen de acuerdo con el siguiente cuadro:

ESTRATOS	Nº MUNIC.	%
- 1.000	188	70
1.001- 5.000	64	24
5.001-50.000	13	5
+ 50.001	1	1
TOTAL	266	100%

Integrados en estos Ayuntamientos, existen un total de 377 Concejos -con una media poblacional de 116 habitantes- que, a partir de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, experimentarán una reducción notable de sus competencias al limitarse éstas, básicamente, a la administración y conservación de su patrimonio, de sus bienes de uso y servicio público y al otorgamiento de licencias urbanísticas, previo informe preceptivo y vinculante del Ayuntamiento correspondiente.

Por otra parte, en los últimos ejercicios ha proliferado la constitución de Mancomunidades de Entidades Locales para la prestación de distintos servicios, fundamentalmente, abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de residuos sólidos y prestación de servicios sociales. En 1990, existen un total de 27 mancomunidades que agrupan a un número aproximado de 175 entidades.

Por último, se señala que en 1990 se aprobó la Ley Foral de Administración Local de Navarra, que sustituye al Reglamento para la Administración Municipal de 1928, y que supone la adaptación del cuerpo normativo que regula la administración local de Navarra a los planteamientos recogidos en la Constitución de 1978, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Para completar este nuevo marco normativo, están pendiente de desarrollo áreas tan importantes como las de Haciendas Locales y las de Presupuestos y Contabilidad.

3.- OPINIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS EN 1990.

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

De acuerdo con el Programa anual para el ejercicio de 1990, se ha actuado en los siguientes Ayuntamientos:

MUNICIPIO	POBLACIÓN	PRESUPUESTO (en millones)	
		GASTOS	INGRESOS
Andosilla	2.524	548	575
Huarte	2.810	181	173
Peralta	4.620	379	469
Cintruénigo	5.447	482	487
Corella	6.450	427	443
Tudela	27.063	2.265	2.527
TOTAL	48.914	4.282	4.674

Estas cifras representan, aproximadamente, un 9 % del total de población de la Comunidad Foral de Navarra y un 11 % del total de los presupuestos liquidados por las Entidades Locales navarras en el ejercicio de 1990.

Respecto a las anteriores cifras de los presupuestos, conviene realizar las siguientes precisiones:

a) Los datos que se ofrecen, y con el fin exclusivo de obtener una visión global del total de la actividad desarrollada en 1990 por los citados Ayuntamientos, han sido obtenidos mediante la incorporación, a los importes del presupuesto ordinario, de los procedentes de los presupuestos extraordinarios vigentes en 1990.

b) La consideración de los presupuestos extraordinarios -en vigor en la Comunidad Foral hasta 1992- conduce a la existencia de superávit o déficit temporales en las sumas totales reflejadas en el cuadro anterior, al tenerse en cuenta exclusivamente los datos correspondientes al ejercicio de 1990 y no contemplarse, en consecuencia, los posibles desfases que existen entre los ingresos afectados y los gastos realizados en los distintos ejercicios de ejecución de la inversión.

c) Incluyen, igualmente, la ejecución de las operaciones procedentes de ejercicios anteriores a 1991 o resultas de gastos e ingresos.

En cuanto a la metodología aplicada en las actuaciones, se ha procedido a fiscalizar la gestión económico-financiera y la ejecución de los presupuestos de los Ayuntamientos, mediante la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría que se han considerado necesarios de acuerdo con los objetivos perseguidos. Todo ello dirigido a emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros auditados así como recomendar la aplicación de una serie de medidas que permitan mejorar el sistema de control interno de la entidad.

3.2.- OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La opinión sobre los estados financieros analizados se estructura, de acuerdo con su Ley Foral reguladora, en los siguientes apartados:

a) Desarrollo y ejecución del Presupuesto de 1990.

En general, la ejecución de los Presupuestos de Gastos e Ingresos fiscalizados reflejan razonablemente el conjunto de operaciones realizadas por los distintos Ayuntamientos objeto de revisión, con las siguientes salvedades:

- No siempre se respeta el carácter limitativo de los créditos para gastos, ya que o bien no se aprueban las oportunas modificaciones presupuestarias o bien éstas se realizan al cierre del ejercicio al objeto de ajustar la ejecución del presupuesto.

- Incorrectas imputaciones presupuestarias, tanto en gastos como en ingresos, si bien no alteran el reflejo global de la actividad municipal desarrollada.

b) Reflejo de la situación patrimonial a 31 de diciembre de 1990, según los principios de contabilidad generalmente aceptados.

El insuficiente sistema contable aplicado, fundamentalmente, en las áreas de Tesorería e Inventario de bienes no ha permitido emitir opinión, en general, sobre la situación patrimonial de los Ayuntamientos analizados. No obstante se señala que esta insuficiencia del sistema contable deriva, en gran medida, de la actual normativa que lo regula.

c) Sometimiento de la actividad económico-financiera al principio de legalidad.

Se han observado diversos incumplimientos de la normativa reguladora en las áreas de personal, presupuestaria y contratación.

d). Organismos Autónomos dependientes de los Ayuntamientos.

En general, ante las deficiencias observadas en la contabilidad y control interno de los Organismos Autónomos locales revisados, se ha omitido opinión sobre la razonabilidad de sus estados financieros.

3.3.- RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones generales emitidas en los informes de fiscalización de las Entidades Locales se han dirigido hacia:

a) La propia entidad fiscalizada, en orden a implantar un conjunto de medidas -en muchos supuestos, recogidas en la legislación vigente- encaminadas a diseñar un sistema contable y de control interno adecuado a su tamaño y volumen de actividad. Las áreas de gestión sobre las que se han emitido mayor número de recomendaciones han sido las de Tesorería, Inventarios, Ingresos fiscales y Contabilidad.

b) Al Parlamento y al Gobierno de Navarra. Los Informes de la Cámara, además de publicarse en el Boletín Oficial del Parlamento, recogen una serie de recomendaciones dirigidas al poder legislativo y al ejecutivo y orientadas a adecuar la legislación vigente en materia económico-financiera a las actuales necesidades de las administraciones locales. En esta línea se destaca la colaboración prestada por la Cámara de Comptos en la definición de un nuevo sistema contable.

4.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1990.

En los cuadros anexos se presenta, a nivel de capítulo, la ejecución del Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos de las Entidades Locales de Navarra correspondientes al ejercicio de 1990, de acuerdo con la información remitida por el Gobierno de Navarra-Departamento de Administración Local.

Así, en los anexos II.2-27 y II.2-28 figuran, los ingresos y gastos de la totalidad de entidades locales, y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial se exponen los cuadros relativos a las entidades con población superior a 50.000 habitantes, a las entidades con población entre 5.000 y 50.000 habitantes y a las entidades inferiores a 5.000 habitantes.

Respecto a las cifras recogidas en los mencionados cuadros, es preciso realizar las siguientes precisiones:

1ª) Reflejan los gastos e ingresos ordinarios de aproximadamente el 90 % de las Entidades Locales de Navarra, que a nivel presupuestario suponen un 95 % del total.

2ª) En general, no se incluyen, al no disponerse de su cuantificación, los presupuestos extraordinarios de inversiones; si bien algunas entidades utilizan la figura del presupuesto único, por lo que sus gastos e ingresos de inversiones sí se incluyen en los cuadros anteriores.

3ª) No contienen, igualmente, las cifras relativas a las modificaciones presupuestarias, al presupuesto definitivo y a la ejecución del capítulo de resultas de ejercicios anteriores.

Teniendo en cuenta estas salvedades, se destacan los aspectos siguientes que se derivan de la ejecución del presupuesto ordinario de gastos e ingresos de 1990:

- Las obligaciones reconocidas del ejercicio ascienden a 31.310 millones de pesetas, presentando un grado de ejecución, respecto al presupuesto inicial, del 91 %. No obstante, en las entidades locales de población inferior a 5.000 habitantes, el grado de ejecución es del 84 %.

- En cuanto a la naturaleza de los gastos destaca que, en las entidades locales de más de 5.000 habitantes, el 80 % de los mismos corresponden a gastos corrientes. Este porcentaje es de sólo el 55 % en las entidades de menos de 5.000 habitantes.

- Los derechos reconocidos del ejercicio suponen un montante de 32.353 millones, con un grado de ejecución, respecto al presupuesto inicial, del 95 %.

- Respecto a la naturaleza económica de los ingresos, sobresale en las entidades locales de más de 5.000 habitantes el importante peso específico de los ingresos corrientes -92 %- y dentro de éstos, destaca que el porcentaje de transferencias corrientes se aproxima al de ingresos de naturaleza tributaria.

- El superávit global del ejercicio asciende a 1.043 millones; no obstante, las entidades de población superior a 5.000 habitantes presentan en su ejecución un déficit de 268 millones.

- De la ejecución del presupuesto de 1991 se deriva la existencia de un ahorro bruto y neto positivo, si bien las entidades pequeñas ofrecen mayores posibilidades de financiar nuevas inversiones o soportar mayor carga financiera.

- El nivel de endeudamiento global es del 16 %, situándose a 9 puntos del límite normativo de endeudamiento. No obstante, en las poblaciones de más de 5.000 habitantes, esta diferencia se reduce a 2 puntos.

- La presión fiscal media -pesetas por habitante- ascendió a 24.815 pts, si bien en las entidades de menos de 5.000 habitantes es un 13 % superior.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de la Rioja, habiéndose deducido del mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a continuación:

Corporaciones	Sujetas a rendición de cuentas	Muestra examinada	No han rendido cuentas
Grupo B: Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.	1	1	--
Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 y 50.000 habitantes.	6	4	2
Grupo D: Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.	167	8	67

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que se ha realizado el presente análisis, se ha procedido a la agregación de los diferentes capítulos presupuestarios que figuran en las liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales. Para una más detallada información, los estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los estratos de población indicados en el apartado anterior.

Como esta Comunidad Autónoma es de carácter uniprovincial, no tiene Diputación Provincial, por lo que no figura en el cuadro el estrato del Grupo A).

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye 13 municipios y reúne 175.916 habitantes.

De ellos destaca Logroño, capital de la Comunidad Autónoma, con una población de 121.911 habitantes, el 69 % del grupo, y un presupuesto de 7.768 millones de pesetas, el 68 % del total.

Los ingresos previstos por operaciones corrientes suponen el 67 % de los ingresos totales, siendo los tributarios la partida más importante, con un 44 %. Los ingresos por operaciones financieras ocupan el segundo lugar, con un 23 %, quedando un 10 % para los procedentes de operaciones de capital.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes son el 60 % del total, seguidos de los de capital, con un 37 %, y solo un 3 % para operaciones financieras, principalmente amortización de los préstamos pendientes.

En las resultas de ejercicios cerrados, los ingresos suponen un 39 % del presupuesto refundido y los gastos un 35 %, valores algo elevados.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 2.569 millones de pesetas, que suponen el 15 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones asciende a un 22 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse medias.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a inversiones reales, por el 72 %, a la compra de bienes y servicios, en un 15 %, y a gastos de personal, en un 4 %.

c) Liquidación y reconocimiento de los derechos y obligaciones.

La liquidación de los derechos por operaciones corrientes es el 70 % de los totales, correspondiendo un 15 % a los procedentes de operaciones de capital y un 15 % a los de operaciones financieras.

El reconocimiento de las obligaciones por operaciones corrientes supone el 56 % del total, destinándose el 38 % a operaciones de capital y el 6 % restante a las financieras, principalmente para amortizar los préstamos pendientes.

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos tienen un superávit de 1.293 millones de pesetas. Este superávit se produce como consecuencia del de resultas, que compensan el resultado negativo del ejercicio. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	1.544 millones de ptas.
- Por ejercicio corriente	(251) millones de ptas.
Suma (superávit)	1.293 millones de ptas.

e) Indicadores significativos

- La formación bruta de capital ha sido de 4.388 millones de pesetas, lo que supone el 25 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 1.556 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, representan el 36 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido de signo negativo (desinversión) en 36 millones de pesetas de pesetas y la variación neta de pasivos financieros fue positiva (aumento del endeudamiento) en 1.155 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Municipios con población superior a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta por el Ayuntamiento de Logroño, único incluido en este grupo, y ha sido aprobada debidamente por el Pleno de la Corporación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes

Los 4 Ayuntamientos examinados en el grupo han rendido esta cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en todos casos.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Se incluyen en este grupo 8 Ayuntamientos, que han rendido las cuentas correspondientes y han sido aprobadas por el Pleno de la Corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administracion de Patrimonio

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en el Ayuntamiento incluido en este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

De los 4 Ayuntamientos que forman el grupo han rendido esta cuenta 2, quedando 2 pendientes (Alfaro y Santo Domingo de la Calzada).

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno del único Ayuntamiento que forma este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran este grupo. Asimismo ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Logroño ha rendido esta cuenta, que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, excepto Alfaro, y ha sido aprobada en todos los casos.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados específicos del examen y comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.1. No coincidencia en algunos de los saldos finales a 31 de diciembre de 1989 con los iniciales a 1 de enero de 1990, en las respectivas Cuentas de Presupuesto.

Se han encontrado diferencias en el arrastre de los saldos pendientes de cobro y de pago en los Ayuntamientos de Grañón y Herce.

3.2.2. Se contabilizan como ingresos en las Cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalía se encuentra en las cuentas del Ayuntamiento de Logroño.

3.2.3. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad superior a los cinco años. Las Corporaciones deben comprobar la posible existencia de valores prescritos y darlos de baja en las cuentas.

Esta circunstancia se da en las cuentas del Ayuntamiento de Logroño.

3.2.4. Se han contraído obligaciones por mayor cuantía de los créditos aprobados en los Ayuntamientos de Grañón y Ledesma de la Cogolla.

3.2.5. En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de Patrimonio se aplican indistintamente los principios de caja o de devengo, según los casos, provocando desajustes contables entre estas cuentas, tanto al contabilizar la amortización de los préstamos concedidos como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Esta anomalía se observa en las cuentas del Ayuntamiento de Logroño.

3.2.6. Carencia de información sobre la recaudación , bien por no rendir cuentas los Recaudadores de la Corporación o los Servicios de Recaudación, provinciales o autonómicos, que prestan este servicio a los Ayuntamientos.

Esta irregularidad se observa en los Ayuntamientos de Alfaro y Santo Domingo de la Calzada, de los que no existe información de la recaudación ni en periodo voluntario ni en periodo ejecutivo.

El total supone el 40 % del colectivo examinado (de mayores de 5.000 habitantes).

3.2.7. En el acta de arqueo al 31 de diciembre de 1990 no se ha aportado la conciliación con las notas o extractos de los Bancos en 2 Ayuntamientos (Grañón y Ledesma de la Cogolla).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

1.- EL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL EJERCICIO 1990.

1.1.- ENTIDADES INTEGRANTES DEL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL.

En el ejercicio de 1990, el subsector público local de la Comunidad Valenciana, presentaba la siguiente estructura:

NATURALEZA	NÚMERO
Ayuntamientos	539
Diputaciones Provinciales	3
Mancomunidades	31
Áreas Metropolitanas	1
Entidades Locales Menores	4
Consorcios	12
Organismos Autónomos	108
Empresas Públicas	26
TOTAL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL	**724**

Los 539 municipios, aglutinaron una población de derecho, según rectificación de los padrones municipales al 1 de enero de 1990 de 3.902.429 habitantes. A nivel provincial, la población tuvo la siguiente distribución:

	NUMERO	POBLACION
Ayuntamientos Alicante	140	1.288.262
Ayuntamientos Castellón	136	453.909
Ayuntamientos Valencia	263	2.160.258
Total Aytos. Comunidad	539	3.902.429

1.2.- RENDICIÓN DE CUENTAS.

La rendición de cuentas del ejercicio 1990, presentó los siguientes resultados:

	Documentación a rendir	Documentación sin rendir	Porcentaje de contestación
Ayuntamientos	539	62	88,5%
Diputaciones Prov.	3	--	100,0%
Mancomunidades	31	5	83,8%
Áreas Metropolitanas	1	--	100,0%
Entidades Loc. Menores	4	--	100,0%
Consorcios	12	2	83,3%
Organismos Autónomos	108	30	72,2%
Empresas Públicas	26	4	84,6%
Total	**724**	**103**	**85'7%**

1.3.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Las cifras agregadas, representativas de la gestión económico-financiera llevada a cabo por el subsector público local de la Comunidad Valenciana, en el ejercicio de 1990, sin tener en cuenta las transferencias internas de recursos corrientes, de capital y financieras, se muestran en el siguiente cuadro:

VARIACIÓN 1989-1990 DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LIQUIDADOS POR LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SUBSECTOR LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIA

(En millones de pesetas)

		1989			1990			% Variación	
ENTIDADES LOCALES	Número	Derechos Liquidados	Obligaciones Reconocidas	Rdos.	Derechos liquidados	Obligaciones reconocidas	Rdos.	Derechos liquidados	Obligaciones reconocidas
Aytos. > 20.000 habitantes	41	225.490	205.783	19.707	269.035	244.643	24.392	19%	19%
Aytos. > 5.000 < 20.000 hab	88	69.909	63.648	6.261	81.226	76.015	5.211	16%	19%
Aytos. < 5.000 hab	410	29.910	26.442	3.468	36.246	33.127	3.119	21%	25%
Total Ayuntamientos	539	325.309	295.873	29.436	386.507	353.785	32.722	19%	20%
Diputaciones Provinciales	3	85.114	80.109	5.005	102.665	101.570	1.095	21%	27%
Mancomunidades	31	1.975	1.788	187	2.069	1.916	153	5%	7%
Area metropolitana	1	10.872	10.855	17	14.495	14.381	114	33%	32%
Entidades locales menores	4	56	49	7	105	78	27	88%	59%
Consorcios	12	4.573	3.846	727	3.223	2.701	522	-30%	-30%
Organismos Autónomos	108	4.937	4.780	157	16.048	15.471	577	225%	224%
Empresas públicas	26	15.562	15.112	450	11.815	13.555	(1.740)	-24%	-10%
Total Sector Local	724	448.398	412.412	35.986	536.927	503.457	33.470	20%	22%

En el cuadro anterior se observa, en primer lugar, la trascendencia económico-presupuestaria de los diferentes grupos de entidades locales, destacando por su materialidad, el colectivo de Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes y las Diputaciones provinciales, que conjuntamente en el ejercicio de 1990, suponen un 69% respectivamente de los derechos y obligaciones liquidadas por el subsector local Valenciano.

En segundo lugar, resalta la evolución de las macromagnitudes representativas de la gestión económico-presupuestaria local. En este sentido, destaca el incremento de los ingresos y gastos liquidados en el colectivo de Ayuntamientos que alcanzan un 19% y 20% respectivamente. En este grupo, las mayores diferencias porcentuales de crecimiento de derechos y de obligaciones se dan en los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.

En tercer lugar, destaca el aumento de un 27% de las obligaciones liquidadas experimentado por las Diputaciones provinciales, originado principalmente, por el mecanismo utilizado por la Diputación de Valencia de incorporación y anulación de remanentes de inversiones.

Asimismo, destaca el notable aumento de los derechos y obligaciones liquidados por los Organismo Autónomos dependientes de las Corporaciones locales, debido a la incorporación en el ejercicio de 1990 al agregado autonómico, por primera vez, del organismo autónomo "Gestión Tributaria de Alicante", dependiente de la Diputación provincial de Alicante.

2.- AYUNTAMIENTOS

2.1.- PRESUPUESTO INICIAL Y DEFINITIVO.

En el ejercicio de 1990, los presupuestos preventivos de gastos del agregado de Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, se situaron en 218.166,6 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 15% respecto de las previsiones iniciales del ejercicio anterior.

El índice de modificaciones presupuestarias, que ofrece las variaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio corriente, en relación con las consignaciones iniciales, experimentó un incremento de 3 puntos con respecto al ejercicio de 1989, situándose en el 24%.

Las previsiones definitivas del estado de ingresos (incluyendo resultas y modificaciones de crédito) alcanzaron la cifra de 396.997,8 millones de pesetas, lo que significa un aumento del 22% respecto al ejercicio anterior.

Las previsiones definitivas del estado de gastos, a nivel de agregado autonómico, ascendieron en el ejercicio 1990 a 383.158,2 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 21% respecto al ejercicio 1989.

El incremento de las consignaciones definitivas en el estado de gastos, junto con la variación del 1,29% experimentada en la población de la comunidad, ha ocasionado que el gasto público por habitante haya aumentado, pasando de 82.235 ptas. en 1989 a 98.185 ptas. en 1990.

2.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

Los derechos liquidados por operaciones realizadas en el ejercicio de 1990, para el conjunto de Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, se elevan a 255.813,4 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. Por otro lado, si se tienen en cuenta los derechos liquidados en el ejercicio 1990, en concepto de resultas de ejercicios anteriores, el total de derechos contraídos en el ejercicio de 1990, asciende a 386.507,3 millones de pesetas, con un porcentaje de aumento respecto al ejercicio 1989 del 19%.

De acuerdo con la importancia cuantitativa de cada capítulo presupuestario dentro del estado de ingresos y del porcentaje de variación del ejercicio 1990, respecto al ejercicio de 1989, el incremento del 15% anteriormente mencionado se ha obtenido fundamentalmente por las variaciones experimentadas en los capítulos, "Impuestos directos", IV "Transferencias corrientes", y VII "Transferencias de capital".

El capítulo I, "Impuestos directos", cuyo aumento alcanza un 23%, está motivado entre otras a las siguientes causas:

- La entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que ha venido a sustituir a las Contribuciones Territoriales Urbana y Rústica y al Impuesto Municipal sobre Solares, ha ocasionado un incremento de las cuotas tributarias, tanto por el incremento de las bases imponibles, ya que las mismas se obtiene a partir del valor catastral, como por el aumento de los tipos de gravamen aplicados.

- Por la aplicación en el ejercicio de 1990, si bien, durante este ejercicio ha sido opcional, del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sustituto del vigente de análoga naturaleza, determinándose la cuantía del mismo en función del valor catastral.

El capítulo IV "Transferencias corrientes", ha experimentado un crecimiento del 24%, debido al aumento del porcentaje de participación de los municipios en los tributos del Estado.

Por lo que respecta al capítulo VII, "Transferencias de capital", se ha producido un incremento del 85%, motivado por el aumento de concesión de subvenciones de carácter finalista, por parte de la Administración autonómica y de las Diputaciones provinciales. El mencionado aumento ha sido consecuencia de un mayor esfuerzo de inversión pública llevado a cabo durante el ejercicio de 1990, por el conjunto de los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

Del total de derechos liquidados en el ejercicio 1990, se han recaudado ingresos por importe de 244.999,9 millones de pesetas, lo que representa un grado de realización del 63%. Al respecto cabe comentar que si bien el citado grado no es satisfactorio, ha mejorado sensiblemente respecto al ejercicio anterior. A nivel de capítulos cabe destacar, que tan sólo se han hecho efectivos el 38% de los derechos liquidados en concepto de "Transferencias de capital". En cambio, en los capítulos de "Transferencias corrientes" e "Impuestos directos", se han hecho efectivos respectivamente, el 93% y 69% de los derechos liquidados.

Los derechos pendientes de cobro ascienden, al 31 de diciembre de 1990, a 141.507,5 millones de pesetas. Dicho importe representa un 37% de los derechos liquidados. De la mencionada cifra, el 53% corresponde al ejercicio corriente, mientras el 47% restante pertenece a derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.

La importancia de los derechos pendientes de cobro procedentes de resultas, puede afectar notablemente al resultado real del ejercicio.

Las obligaciones contraídas en el estado de gastos a nivel de agregado autonómico, por operaciones generadas durante el ejercicio de 1990, han ascendido a 247.233,8 millones de pesetas, lo que supone un aumento del 17% con respecto a las generadas en el ejercicio de 1989. Si a la cifra anterior, se le añaden las

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, el montante total de obligaciones liquidadas se eleva a 353.784,6 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 20% con respecto al ejercicio anterior.

De acuerdo con la importancia cuantitativa de cada capítulo dentro del estado de gastos y del porcentaje de variación con respecto al ejercicio anterior, el incremento de las obligaciones contraídas en 1990, al margen del factor inflacionista, ha venido determinado por los aumentos experimentados en los capítulos I "Gastos de personal", II "Compras de bienes y servicios" y VI "Inversiones reales".

El capítulo I "Gastos de personal" cuyo aumento alcanzó el 19%, se ha producido por las siguientes causas:

- Incremento de las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios y personal laboral, en un porcentaje aproximado del 6,5%.

- Incremento de las plantillas, sobre todo de trabajadores sujetos a régimen laboral.

- Crecimiento de las cuotas empresariales a la MUNPAL y al Régimen General de la Seguridad Social, en consonancia con los aumentos de personal y con los aumentos retributivos.

El capítulo II "Compras de bienes corrientes y servicios", presenta un incremento del 17% respecto al año anterior.

El capítulo VI "Inversiones reales", ha experimentado un aumento del 30%, lo cual ha supuesto un mayor esfuerzo inversor público, que ha estado financiado por el incremento de las subvenciones de capital concedidas por la Administración autonómica y las Diputaciones provinciales, por recursos propios y por endeudamiento.

Del total de obligaciones liquidadas durante el ejercicio 1990, se han pagado 217.174,8 millones de pesetas, lo que ha supuesto un porcentaje de pago del 61%, quedando pendientes de pago un 39% de las obligaciones contraídas. De este pendiente de pago, corresponde un 32% a obligaciones de ejercicio anteriores y un 68% al ejercicio corriente.

2.3.- RESULTADOS PRESUPUESTARIOS.

Los resultados acumulados, en millones de pesetas, a 31 de diciembre de 1990, por los Ayuntamientos de la Comunidad, tanto a nivel autonómico como por estratos de población, se distribuyen en los siguientes componentes:

	Ayuntamientos AUTONÓMICOS	Ayuntamientos < 5.000	Ayuntamientos >5.000 <20.000	Ayuntamientos >20.000
CAJA 31/12/90	27.825	3.544,9	4.777,5	19.502,6
Dchos pendientes cobro ejerc.anteriores	66.185,5	3.251,8	12.105,9	50.827,8
Dchos pendientes cobro 1990	75.322	6.951,7	15.960,2	52.410,1
TOTAL	169.332,5	13.748,4	32.843,6	122.740,5
Obligaciones pendientes de pago	136.609,7	10.629,3	27.632,4	98.348
Resultado acumulado al 31-12-90	32.722,8	3.119,1	5.211,2	24.392,5
Porcentaje sobre presupuesto	9%	8%	6%	9%

El resultado acumulado alcanzado de forma conjunta por los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana en el ejercicio 1990, ascendió a 32.722,8 millones de pesetas, lo que supone un 9% del presupuesto definitivo de gastos.

Del cuadro anterior se deduce que los resultados acumulados al 31 de diciembre de 1990, están sujetos en gran medida a que en ejercicios posteriores se desarrolle una eficaz gestión de cobro de los derechos pendientes, en especial para los procedentes de ejercicios anteriores.

3.- DIPUTACIONES

3.1.- PRESUPUESTO INICIAL Y DEFINITIVO.

En el ejercicio de 1990, los presupuestos preventivos a nivel de agregado autonómico de las Diputaciones provinciales, se situaron en 69.236,9 millones de pesetas, cifra que representa un incremento del 18% sobre el ejercicio de 1989.

Los presupuestos refundidos agregados, teniendo en cuenta los remanentes de ingresos y gastos provenientes del ejercicio anterior de la Diputación Provincial de Valencia y las resultas de ejercicios cerrados arrojaron un superávit inicial de 1.[illegible]06,7 millones de pesetas

Las previsiones definitivas del ejercicio 1990, tanto del estado de ingresos como del de gastos, obtenidas por la integración de las modificaciones de crédito al presupuesto refundido, han experimentado un incremento de un 21%, en relación con las consignaciones definitivas del ejercicio de 1989, de ambos estados.

3.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los derechos liquidados por operaciones realizadas en el ejercicio de 1990, han experimentado un aumento del 22% con respecto al ejercicio anterior.

Si se añaden los derechos contraídos por operaciones realizadas en ejercicios anteriores, el incremento con respecto al ejercicio 1989, se sitúa en el 21%.

Al igual que ocurría en el ejercicio de 1989, el capítulo de mayor relevancia y que se constituye como la principal fuente de financiación se corresponde con las transferencias corrientes, que ascienden a 31.492,8 millones de pesetas, lo que supone un 31% de total de derechos liquidados del estado de ingresos agregado de las tres Diputaciones, incluidas las resultas de ejercicios anteriores y la existencia en caja a 1 de enero de 1990.

En cuanto a la variación del 42% de las operaciones de carácter financiero, destaca el capítulo de "Variación de pasivos financieros" de la Diputación Provincial de Valencia, cuyos derechos liquidados por operaciones de financiación han aumentado en un 70% con respecto al ejercicio de 1989, situándose en 16.709 millones de pesetas

De los derechos liquidados, se han recaudado ingresos por importe de 78.303 millones de pesetas, lo que equivale a un grado de realización del 76%. Este porcentaje ha experimentado un ligero incremento de 3 puntos, respecto al obtenido en el ejercicio de 1989.

Los derechos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1990, se situaron en 24.362,8 millones de pesetas, lo que representa un 24% de los derechos liquidados y un aumento del 5% respecto a los deudores existentes al 31 de diciembre de 1989.

La cifra anteriormente mencionada está compuesta en un 30% por operaciones realizadas en ejercicios anteriores y en un 70% por operaciones realizadas en el ejercicio 1990.

Las obligaciones contraídas a nivel de agregado autonómico por operaciones realizadas en el ejercicio de 1990, se han incrementado en un 37% con respecto ejercicio anterior.

Si se tienen en cuenta además las obligaciones contraídas en el ejercicio 1990 por operaciones realizadas en ejercicios anteriores, el aumento con respecto al ejercicio en 1989 se sitúa en un 27%.

En el estado de gastos, del agregado de las tres Diputaciones, se observa que es el capítulo 0 "Resultas de ejercicios cerrados", el que tiene mayor importancia significativa, ya que el total de obligaciones liquidadas en el mismo, asciende a 22.309,5 millones de pesetas, lo que representa el 22% del total de obligaciones liquidadas por el conjunto de las tres Diputaciones provinciales.

Asimismo, destaca el capítulo I "Gastos de personal", cuyas obligaciones contraídas ascienden a 19.633,9 millones de pesetas, lo que representa el 19% del total de obligaciones liquidadas por las tres Diputaciones.

El grado de realización o de pagos efectuados ha alcanzado, a nivel autonómico, el 70%, por lo que han quedado pendiente de pago el 30% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio de 1990. Del total de obligaciones reconocidas, pendientes de pago al 31 de diciembre de 1990, el 26% se había generado en ejercicios anteriores y el 74% se había generado en 1990. Por otro lado, destacan por su bajo grado de cumplimiento, los capítulos VI "Inversiones reales", con un 29% y VII "Transferencias de capital" con un 18%.

3.3.- RESULTADOS PRESUPUESTARIOS.

Los resultados obtenidos por las Diputaciones provinciales en el ejercicio de 1990, así como su agregado autonómico y el detalle de sus componentes significativos es el siguiente, en millones de pesetas:

	Diputaciones AUTONÓMICAS	DIPUTACIÓN ALICANTE	DIPUTACIÓN CASTELLÓN	DIPUTACIÓN VALENCIA
CAJA 31/12/90	7.210,9	729,1	2.951,3	3.530,5
Dchos pendientes cobro ejerc.anteriores	7 407,4	1.450,1	982,2	4.975,2
Dchos pendientes cobro 1990	16 955,4	5.004,4	1.809,5	10.141,4
TOTAL	31 573,7	7.183,6	5.743	18.647,1
Obligaciones pendientes de pago	30 478,3	6.780,6	5.539,4	18.158,3
Resultado acumulado al 31-12-90	1.0[illegible]5,4	403	203,6	488,8
Porcentaje sobre presupuesto	1%	1%	2%	1%

Del cuadro anterior se deduce que los resultados acumulados al 31 de diciembre de 1990, están sujetos en gran medida a que en ejercicios posteriores se desarrolle una eficaz gestión de cobro de los derechos pendientes, en especial para los procedentes de ejercicios anteriores.

4.- EMPRESAS PÚBLICAS.

4.1.- BALANCE

En cuanto a las empresas públicas dependientes de las Corporaciones Locales, el estado financiero agregado de las mismas se muestra en la página siguiente.

Como cuenta más importante del activo, del agregado de empresas públicas, destaca el inmovilizado material neto, que representa un 49,6% del total de las cuentas de activo, siendo las empresas "Aguas de Alicante", "Empresa Municipal de Transportes de Valencia" y "Mercavalencia", las que mayor peso relativo tienen en el inmovilizado material neto.

Por lo que respecta al pasivo, las cuentas más significativas son las de capital suscrito, créditos a corto plazo y créditos a largo plazo, ya que suponen respectivamente el 36,1%, el 23,9% y el 32,1% del total del pasivo agregado.

Destacan en términos absolutos, por lo que se refiere al capital las tres empresas mencionadas anteriormente, por lo que respecta a los créditos a largo plazo, la "Empresa Municipal de Transportes de Valencia" y "A.U.M.S.A." y por lo que se refiere a los créditos a corto plazo, las dos anteriores más la empresa "Aguas de Alicante".

BALANCE AGREGADO
(En millones de pesetas)

	ACTIVO	1989	1990		PASIVO	1989	1990
A)	ACCIONISTAS DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	22	9	A)	FONDOS PROPIOS	6.741	6.674
B)	IMMOVILIZADO	9.049	8.900		I. Capital suscrito	0	6.271
	I. Gastos primer establecimiento	80	31		II. Prima de emisión	0	0
	II. Inmovilizaciones immateriales	48	58		III. Reserva de revalorización	4.718	333
	III. Inmovilizaciones materiales	8.628	8.624		IV. Reservas	1.573	1.827
	IV. Inmovilizaciones financieras	293	187		V. Resultados de ejercicios anteriores	0	(17)
	V. Acciones propias	0	0		VI. Pdas. y gcias. (Benef. o Pdas.)	450	(1.740)
C)	GASTOS A DISTRIBUIR DIVERSOS EJERCICIOS	0	82		VII. Dividendo a cta. librado en ejerc.	0	0
D)	ACTIVO CIRCULANTE	6.977	8.392	B)	INGRESOS DISTRIB. DIV. EJERC.	221	429
	I. Accion. per desembolsos exig.	0	0	C)	PROVIS. PARA RGOS. Y GTOS.	280	549
	II. Existencias	2.527	3.617	D)	CREDITOS A LARGO PLAZO	2.847	4.154
	III. Deudores	3.299	4.131	E)	CREDITOS A CORTO PLAZO	5.959	5.577
	IV. Inversiones financ. temporales	454	177				
	V. Tesorería	550	352				
	VI. Ajustes por periodificación	147	115				
	T O T A L A C T I V O	16.048	17.383		T O T A L P A S I V O	16.048	17.383

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA
(en millones de pesetas)

	D E B E	1989	1990		H A B E R	1989	1990
A)	GASTOS	11.989	12.935	B)	INGRESOS	10.139	11.330
	1. Consumo de explotación	2.803	4.379		1. Ingresos de explotación	10.139	11.330
	2. Gastos de personal	5.870	6.115		a) Importe neto cifra de negocs.	10.106	11.094
	a) Sueldos, salarios y asimilados	5.494	5.726		b) Otros ingresos de explotac.	213	236
	b) Cargas sociales	376	389		I. PERDIDAS DE EXPLOTACION	1.670	1.605
	3. Dotación para amortiz. de inmov.	677	650		2. Ingresos financieros	148	105
	4. Var. de pr. de tráf. y pér. créd. in.	157	58		a) En empresas del grupo	0	0
	5. Otros gtos. de explotación	2.482	1.733		b) En empresas asociadas	0	0
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	0	0		c) Otras	148	73
	6. Gastos financieros y asimilados	434	356		d) Bcios. de inversiones financ.	0	32
	a) Por deudas con empr. grupo	0	0		3. Diferencias positivas de cambio	0	0
	b) Por deudas con empr. asoc.	0	1		II. RTDOS. FINANC. NEGATIVOS	286	251
	c) Por otras deudas	434	355		III. PERDS. ACTIVS. ORDINARIAS	1.956	1.856
	d) Pérdidas de inversión financ.	0	0		4. Benef. enaj. inmov. y cart. cont.	0	0
	7. Variac. de prov. de invers. financ.	0	0		5. Benef. op. con acc. y obl. prop.	0	0
	8. Diferencias negativas de cambio	0	0		6. Sub. cap. transf. rtdo. del ejerc.	0	29
	II. RESULTADOS FINANC. POSIT.	0	0		7. Ingresos extraordinarios	0	168
	III. BCIO. DE ACTIV. ORDINARIAS	0	0		8. Ingresos y ben. de otros ejercs.	0	97
	9. Var. prov. inmov. y cart. control	0	26		IV. RTDOS. EXTR. NEGATIVOS	155	0
	10. Pérd. prov. inmov. y cart. cont.	0	10		V. PERD. ANTES DE IMPUESTOS	2.111	1.643
	11. Pérd. op. con acc. y obl. propias	0	0		9. Aport. Públ. para financ. pérds.	2.561	86
	12. Gastos extraordinarios	155	16		VI. RTDO. EJERCICIO (PERD.)	0	1.740
	13. Gtos. y pérds. de otros ejercics.	0	29				
	IV. RTDOS. EXTR. POSITIVOS	0	213				
	V. BCIOS. ANTES DE IMPUESTOS	0	0				
	14. Impuesto sobre sociedades	0	183				
	15. Otros impuestos	0	0				
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	0450	0				

4.2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En cuanto al agregado autonómico de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 1990 de las empresas públicas dependientes de las Corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, hay que indicar, que las actividades ordinarias han producido unas pérdidas de 1.856,2 millones de pesetas, de las que 1.605,1 millones de pesetas, han sido originadas por operaciones de explotación y 251,1 por operaciones financieras.

No obstante, estas pérdidas han sido compensadas por los resultados extraordinarios positivos alcanzados, que han sido de 212,5 millones de pesetas y por las aportaciones públicas, vía subvenciones de explotación para financiación de pérdidas, que se han situado en 86 millones de pesetas, lo que ha provocado que el resultado neto del ejercicio presenta un déficit de 1.557,7 millones de pesetas Si a dicha cifra se adiciona el importe del impuesto sobre sociedades, la cuenta de pérdidas y ganancias presenta un resultado negativo de 1.740,5 millones de pesetas

Debe señalarse, que en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada de 1989, se incluye una "Aportación Pública para la financiación de pérdidas" de 2.561 millones de pesetas, mientras que en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada de 1990, sólo se incluyen 86 millones de pesetas

5.- OTRAS ENTIDADES LOCALES.

5.1.- RESULTADOS PRESUPUESTARIOS.

Los componentes representativos del resultado acumulado al 31 de diciembre de 1990 del resto de entidades locales, son las siguientes, en millones de pesetas:

	MANCOMUNIDADES	ÁREAS METROPOLITANAS	E.L.M.	CONSORCIOS	OO.AA.
Caja 31/12/90	132.4	82.1	10.6	228.7	882.9
Derechos ptes.cobro ant	263.9	6 648.8	3.2	691.0	133,3
Derechos ptes.cobro 1990	341.6	2 673.8	33.4	799,0	1.368,4
TOTAL	727.8	9 306.7	47.2	1.718.7	2.384.6
Obligaciones pendientes de pago	574.6	9 191.4	20.6	1.196.6	1.807,6
Resultado acumulado al 31-12-90	163.3	114.3	26.7	522.1	577,0
Porcentaje sobre presupuesto	7%	1%	19%	17%	4%

No obstante, hay que añadir que la realización del importe de los derechos pendientes de cobro, sobre todo, los que proceden de ejercicios anteriores, pueden tener una repercusión directa sobre el superávit acumulado, que podría incluso alterar el mismo en el caso de que en el futuro no llegarán a percibirse los citados ingresos.

6.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Como consecuencia del ejercicio de la función fiscalizadora en primer lugar, destaca la gran variedad de criterios y de grados de cumplimiento de las normas legales debido al número de Entidades Locales.

No obstante, con carácter general, se observa lo siguiente:

- Contratación directa, como sistema más frecuente, con gran diferencia sobre los demás. Cuando no se fundamenta por razones de cuantía, los expedientes, no suelen recoger la motivación de este sistema de contratación.
- Incumplimiento de los plazos contractuales de ejecución, sin que, normalmente, consten los motivos en los expedientes.
- Frecuentes omisiones de las actas de replanteo y de recepción, tanto provisionales como definitivas.
- Inadecuado reflejo contable del proceso de contratación y de su ejecución.

Por otra parte, merece destacar la importancia en el subsector local de los Planes Provinciales de Obras y Servicios. En relación con ellos, se han observado los siguientes problemas específicos:

- Retraso en la aprobación de dichos Planes que condiciona su posterior ejecución.
- Conveniencia de que cuando la obra no la contrate directamente la Diputación, esta conceda subvenciones finalistas a los Ayuntamientos, que actuarán como órganos de contratación, eliminando así los sistemas de "delegación" y "adjudicación" de obras en los Ayuntamientos por parte de las Diputaciones.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO

1.- SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL - AYUNTAMIENTOS

Este epígrafe presenta una visión global de los Ayuntamientos a partir de los datos suministrados por ellos, referidos al ejercicio 1990: Cuentas Anuales y determinados cuestionarios. A través de ellos se han identificado y valorado unos requisitos básicos que determinan el grado de control interno existente. La documentación remitida ha sido sometida a una revisión formal.

Se han estratificado los Ayuntamientos en siete grupos, según su número de habitantes, puesto que esta variable determina el tamaño de la administración municipal, que a su vez puede diferenciar los niveles de control existentes.

	Número Aytos.	Número Habitantes
Más de 100.000 Hbts.	4	888.920
Entre 30.000 y 100.000 Hbts.	8	409.807
Entre 15.000 y 30.000 Hbts.	17	339.892
Entre 5.000 y 15.000 Hbts.	36	308.150
Entre 2.000 y 5.000 Hbts.	31	105.437
Entre 500 y 2.000 Hbts.	85	89.403
Menos de 500 Hbts.	64	18.092
Total C.A.P.V.	245	2.159.701

2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Se han analizado 14 variables de control interno cuya valoración se detalla en la tabla adjunta, describiéndose con mayor amplitud el criterio utilizado en el apartado de Conclusiones. Para la obtención de las mismas, se han considerado tres posibles situaciones:

- Situación correcta. El Ayuntamiento cumple razonablemente los requisitos exigibles.
- Incidencia significativa. Se producen cuando los incumplimientos legales no tienen una relevancia grave.
- Deficiencia importante. Reflejan incumplimientos que se consideran de gran importancia para determinar la existencia de un adecuado control de la actividad municipal.

DIAGNOSIS 1990
ASPECTOS DE CONTROL INTERNO VALORADOS

DENOMINACIÓN	*DESCRIPCIÓN*	*INCIDENCIAS*	
		IMPORTANTE	*SIGNIFICATIVO*
PAGOS/COBROS	Arqueo coincide con año anterior, Liquid., VIAP y extractos	no	
PRESUP. FECHA	Fecha aprobación provisional del presupuesto	> 30 jun	> 31 mar
PRESUP. BASES	Existe norma municipal de ejecución presupuestaria	No	
PRESUP. ANEXOS	Anexos de inversiones y plantilla	Ninguno	Sólo uno
VIAP	No utilización. Detalle por rúbricas. Rúbricas "varias" elevado mvto.	No/elevado	
CRITERIO COR.	Hay saldos pendientes de cobro/pago por ops. corrientes	No	
CRITERIO INV.	Criterio para reconocer obligaciones por inversión	Al adjudicar	
CTRL. INMOV.	Existencia de inventario actualizado y valorado de bienes	No/antiguo	
CTA. GRAL.	Fecha de presentación al Pleno de la Cta. General de Presupuestos	> 31 dic 91	> 1 set 91
EJECUTIVA	Utilización de la vía ejecutiva para el cobro de impagados	No	
OFERTA EMPLEO	Publicidad a la oferta municipal de empleo	No	
IVA-TERCEROS	Confecciona mod. 348 de relaciones con terceros	No	
ORDENANZAS	Se aprueban las ordenanzas dentro de plazos	> 1en 90	
CONTRATOS	Sistema de selección adecuado. Tramitación adecuada	Información no remitida Uso indebido C. Directa Tramitación irregular	

3.- CONCLUSIONES

En el cuadro que sigue se detalla, para las distintas agrupaciones de Ayuntamientos, el número total de incidencias valoradas como importantes en los 14 aspectos que han sido objeto de control:

		Más de 100.000 Hbts.	Entre 30.000 y 100.000 Hbts.	Entre 15.000 y 30.000 Hbts.	Entre 5.000 y 15.000 Hbts.	Entre 2.000 y 5.000 Hbts.	Entre 500 y 2.000 Hbts.	Menores de 500 Hbts.	TOTAL C.A.P.V.
Núm. Ayuntamientos		4	8	17	36	31	85	64	245
Pagos/cobros		0	1	1	4	11	19	15	51
Presupuesto	Fecha	1	2	7	13	13	39	32	107
	Bases	0	0	1	8	11	39	41	100
	Anexos	0	1	2	3	6	11	15	38
VIAP		1	5	4	13	11	38	20	92
Criterios	Corriente	0	0	0	0	0	18	26	44
	Inversión	2	4	16	23	22	76	55	198
Control inmovilizado		4	6	9	21	15	61	47	163
Cuenta General		1	2	8	9	10	15	13	58
Ejecutiva		0	0	1	14	17	72	58	162
Oferta empleo		2	0	7	12	0	0	0	21
IVA		2	2	12	21	23	70	56	186
Ordenanzas		0	0	1	5	6	11	9	32
Contratos		1	3	7	21	20	40	22	114
MEDIA (*)		3,5	3,3	4,5	4,6	5,3	6,0	6,4	5,6

(*) Media de incidencias del estrato: total de incidencias / nº Ayuntamientos

Se producen incidencias en más de la mitad de Ayuntamientos en los siguientes aspectos:

Criterio de contabilización de inversiones (Aptdo. 3.4).

Control del inmovilizado (Aptdo. 3.5).

Utilización de la vía de apremio para el cobro de tributos (Aptdo. 3.7).

Confección de la declaración anual de relaciones con terceros (Aptdo. 3.9).

Las dos primeras deficiencias, tienen en parte su origen en la vigencia durante 1990 de una normativa presupuestaria y contable promulgada hace 40 años y que sigue vigente en sus aspectos fundamentales. La nueva normativa entrará en vigor en 1993 para los Ayuntamientos con más de 5.000 habitantes y en 1994 para el resto.

Por otro lado, los Ayuntamientos que presentan incidencias importantes en 10 o más de las 14 variables controladas:

Arcentales	Lemoiz	Mutriku
Nabarniz	Okondo	Ubidea
Zarátamo		

Hay que señalar que en este grupo se incluye Ubidea, único Ayuntamiento de la Comunidad que no dispone de registros contables referidos a 1990, según se pudo comprobar en visita realizada a dicho Ayuntamiento.

Los Ayuntamientos con menor número de deficiencias (2 o menos) son:

Alegria Dulantzi	Arrigorriaga	Astigarraga
Azpeitia	Barakaldo	Carranza
Deba	Errigoiti	Gautegiz de Arteaga
Irun	Loiu	Markina
Mungia	Portugalete	Zaldibar

En el cuadro inicial de este apartado se observa un progresivo incremento de la media de incidencias, a medida que disminuye el tamaño de administración. Así, los 149 Ayuntamientos con menos de 2.000 habitantes incumplen una media de 6 de los 14 aspectos controlados. Estas administraciones gestionan gastos corrientes por 4.788 millones de pesetas, con una media de 32 millones de pesetas por Ayuntamientos, que se convierte en 46 y 14 millones si se consideran separadamente los mayores y menores de 500 habitantes. Las funciones de asesoramiento legal y gestión administrativa, imprescindibles para una adecuada gestión de los fondos públicos, tienen unos elevados costes de difícil encaje en volúmenes tan reducidos de gasto corriente. Las limitaciones de las pequeñas administraciones se intentan resolver con la actual tendencia a la creación de mancomunidades y consorcios, que asumen muchas de las competencias desarrolladas anteriormente por aquellas.

Los 29 Ayuntamientos con más de 15.000 habitantes destinaron en 1990 un total de 16.344 millones de pesetas a los capítulos 4 y 7 de gastos, dirigidos en un elevado porcentaje a organismos autónomos y sociedades municipales. En las fiscalizaciones realizadas hasta la fecha se ha observado el vacío legal existente en la normativa estatal en cuanto a la ejecución de las consignaciones de estos capítulos. Los Ayuntamientos optan por consignar un importe en el presupuesto y transferir dicho importe sin tener en cuenta las desviaciones en la ejecución del presupuesto de las entidades dependientes. Este criterio y el mejorable nivel de control de dichas entidades dependientes, origina que se produzcan significativos remanentes de tesorería positivos y negativos en dichas entidades. El art. 5 de la LRBRL establece la aplicabilidad con carácter supletorio de la normativa autonómica, que sí está desarrollada en este aspecto en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta normativa adaptada a las especificidades de cada Ayuntamientos, podría volcarse en sus normas municipales presupuestarias.

El resultado de distribuir territorialmente el resumen total de incidencias importantes es:

INCIDENCIAS POR TERRITORIOS Y TRAMOS DE POBLACIÓN

	Nº Aytos	Pagos/ Cobros	Presupuesto			VIAP	Criterios		Ctrol. Inmov.	Cta. Gral.	Ejecutiva	Oferta empleo	IVA	Ordenanza	Contratos	Total	Media
			Fecha	Bases	Anexo		Corr.	Invers.									
Mayores de 100.000																	
Alava	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4	4,0
Bizkaia	2	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	5	2,5
Guipuzkoa	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	5	5,0
TOTAL	4	0	1	0	0	1	0	2	4	1	0	2	2	0	1	14	3,5
Entre 30.000/100.000																	
Bizkaia	5	0	1	0	1	4	0	3	3	2	0	0	2	0	1	17	3,4
Guipuzkoa	3	1	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	2	9	3,0
TOTAL	8	1	2	0	1	5	0	4	6	2	0	0	2	0	3	26	3,3
Entre 15.000/30.000																	
Alava	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	6	6,0
Bizkaia	8	0	4	0	0	1	0	7	3	1	1	1	7	0	4	29	3,6
Guipuzkoa	8	0	3	1	2	3	0	8	5	6	0	5	4	1	3	41	5,1
TOTAL	17	1	7	1	2	4	0	16	9	8	1	7	12	1	7	76	4,5
Entre 5.000 y 15.000																	
Alava	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	7	7,0
Bizkaia	18	3	6	4	0	8	0	13	10	4	4	3	14	5	11	85	4,7
Guipuzkoa	17	1	6	3	2	4	0	10	10	5	10	8	6	0	10	75	4,4
TOTAL	36	4	13	8	3	13	0	23	21	9	14	12	21	5	21	167	4,6
Entre 2.000 y 5.000																	
Alava	3	1	1	3	1	0	0	2	3	0	3	0	3	1	1	19	6,3
Bizkaia	15	5	8	3	1	6	0	12	4	5	6	0	12	4	11	77	5,1
Guipuzkoa	13	5	4	5	4	5	0	8	8	5	8	0	8	1	8	69	5,3
TOTAL	31	11	13	11	6	11	0	22	15	10	17	0	23	6	20	165	5,3
Entre 500 y 2.000																	
Alava	24	6	1	21	0	16	3	23	16	1	18	0	21	6	11	143	6,0
Bizkaia	38	8	25	11	8	14	9	35	25	11	35	0	35	4	23	243	6,4
Guipuzkoa	23	5	13	7	3	8	6	18	20	3	19	0	14	1	6	123	5,3
TOTAL	85	19	39	39	11	38	18	76	61	15	72	0	70	11	40	509	6,0

	Nº Aytos	Pagos/ Cobros	Presupuesto			VIAP	Criterios		Ctrol. Inmov.	Cta. Gral.	Ejecutiva	Oferta empleo	IVA	Ordenanza	Contratos	Total	Media
			Fecha	Bases	Anexo		Corr.	Invers.									
Menores de 500																	
Alava	21	7	0	20	1	11	6	18	14	2	16	0	21	3	5	124	5,9
Bizkaia	21	6	15	11	8	6	4	18	16	6	20	0	21	6	14	151	7,2
Gulpuzkoa	22	2	17	10	6	3	16	19	17	5	22	0	14	0	3	134	6,1
TOTAL	64	15	32	41	15	20	26	55	47	13	58	0	56	9	22	409	6,4
CONJUNTO																	
Alava	51	15	3	45	3	29	9	45	36	4	37	2	48	10	17	303	5,9
Bizkaia	107	22	60	29	18	39	13	89	63	29	66	5	91	19	64	607	5,7
Gulpuzkoa	87	14	44	26	17	24	22	64	64	25	59	14	47	3	33	456	5,2
TOTAL EUSKADI	245	51	107	100	38	92	44	198	163	58	162	21	186	32	114	1366	5,6

3.1.- CONTROL DE COBROS Y PAGOS

Se ha verificado que el saldo inicial, movimientos y saldo final del arqueo anual coinciden respectivamente con el final del año anterior, los movimientos de la Liquidación y VIAP y el saldo que muestran los extractos bancarios. Caso de no coincidir el saldo final del Arqueo con los extractos bancarios se requería a los Ayuntamientos la remisión de una conciliación, explicando dicha diferencia. Una incidencia no explicada en cualquiera de estas verificaciones se valora como incidencia importante.

Se ha observado la existencia de problemas en un total de 51 administraciones. Este hecho tiene particular importancia en aquellas administraciones que gestionan mayores recursos (más de 5.000 habitantes):

Abadiño	Balmaseda	Beasain
Lekeitio	Llodio	Renteria

3.2.- PRESUPUESTO

Se valora en este epígrafe la fecha en que el Ayuntamientos aprobó provisionalmente el presupuesto para 1990 y el cumplimiento de la normativa con respecto a determinados documentos que han de acompañar al mismo: bases de ejecución y anexos de personal e inversiones.

Casi la mitad de los Ayuntamientos aprobaron el presupuesto de 1990 con posterioridad al 30 de junio de dicho año y tan sólo 71 lo aprobaron con anterioridad al 31 de marzo.

La normativa de ejecución del presupuesto se define en el TRRL y en la LHL, de manera muy genérica. El desarrollo y adaptación de la anterior normativa en las correspondientes bases de ejecución, adquiere importancia en la gestión de las mayores administraciones. Las pequeñas pueden, en general, operar con lo establecido en las citadas normas. Los presupuestos de 100 Ayuntamientos fueron aprobados sin norma específica de ejecución presupuestaria, aunque esta incidencia tan sólo se detecta en 9 Ayuntamientos con más de 5.000 habitantes.

La información remitida al Pleno para aprobar el presupuesto de 1990 fue en general incompleta; tan sólo 68 Ayuntamientos aprobaron el presupuesto con los preceptivos anexos de personal e inversiones. La normativa vigente es expresa al regular que corresponde al Pleno establecer el número de personas y retribuciones de la plantilla municipal. El equipo de gobierno ha de confeccionar un programa de inversiones, cuantificado a partir de proyectos o informes técnicos, que soporte las necesidades planteadas en el proyecto de presupuesto presentado al Pleno.

La no inclusión de los anexos citados en el anterior párrafo origina que el Pleno apruebe unas consignaciones globales para esos fines, de los cuales el equipo de gobierno dispone del modo que estime más oportuno, sin tener que seguir las directrices marcadas por el Pleno.

3.3.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (VIAP).

Entre las Cuentas Anuales a rendir al Pleno se incluye la de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP). Solicitada dicha Cuenta, algunos Ayuntamientos no pudieron remitirla. En otros casos, pudo observarse que el Ayuntamientos recogía en una única rúbrica la totalidad de operaciones extrapresupuestarias. Ambas incidencias indican un nulo o bajo nivel de control de dichas transacciones de carácter extrapresupuestario. También se pudo observar que algunos Ayuntamientos presentaban movimientos significativos en rúbricas distintas a las habituales (fianzas, avales y retenciones). Se valora negativamente este hecho ya que puede indicar que determinadas transacciones de carácter presupuestario se reflejen sólo extrapresupuestariamente.

Las dos primeras incidencias se producen generalmente en los Ayuntamientos con menos de 2.000 habitantes. Para el resto, la incidencia se motiva en el significativo volumen de movimientos en rúbricas distintas a las de retenciones, fianzas y avales.

3.4.- CRITERIOS CONTABLES.

Las Liquidaciones remitidas por algunos Ayuntamientos no presentaban saldos pendientes de cobro o de pago motivados en operaciones corrientes. La inexistencia de dichos saldos se debe al criterio utilizado para reconocer derechos y obligaciones: el Ayuntamientos no refleja el gasto o ingreso cuando éste se produce, sino cuando se paga o cobra. De este modo, los datos de ejecución no son representativos, al no incluir aquellas transacciones que no han originado flujos monetarios. En el caso de los ingresos, este hecho tiene especial importancia, ya que es habitual que la utilización de este criterio vaya unida a un deficiente control sobre los recibos y liquidaciones pendientes de cobro.

Un total de 44 Ayuntamientos con población inferior a 2.000 habitantes, utilizan el criterio de caja para el registro de operaciones corrientes.
La mayoría de los Ayuntamientos (81%) reconoce las obligaciones por inversiones en el momento de la adjudicación de la obra o incluso con anterioridad a la misma. La Liquidación así practicada no presenta el grado de ejecución real del programa de inversiones, con lo que el Pleno no dispone de una información fundamental para valorar la gestión del equipo de gobierno.

Esta deficiencia se produce en gran medida por la utilización de paquetes contables que no contemplan las fases ADOP de ejecución del presupuesto, que desaparecerán en 1993 en los municipios de más de 5.000 habitantes, con la entrada en vigor de la nueva normativa. Algunos Ayuntamientos se han adelantado a dicha fecha, mientras que otros siguen con el criterio comentado anteriormente que, aunque defendible en el marco de la anterior normativa, es incorrecto para un adecuado control de la actividad municipal.

3.5.- CONTROL DEL INMOVILIZADO

Los elementos que componen el inmovilizado municipal deben reflejarse en el Inventario en el que se anotarán las variaciones producidas en el año. El cuestionario remitido a los Ayuntamientos incluía un apartado referido a dicho Inventario, en el que debían indicar si el mismo se hallaba valorado y actualizado al 31 de diciembre de 1990. En tal caso se estima que operaba un adecuado control sobre el inmovilizado (82 Ayuntamientos).

A pesar de ello, el sistema contable definido por la normativa vigente durante 1990 dificulta el adecuado control del patrimonio, al no contemplar dicho control de manera integrada con la contabilidad presupuestaria. Por ello, determinadas transacciones que afectan al patrimonio que sí se incluyen en la Liquidación, no se consideran al modificar el Inventario, con lo que este último pierde representatividad. También es habitual entre los Ayuntamientos que actualizan el Inventario que no se incluyan elementos tales como viales, parques y las instalaciones de alumbrado público, abastecimiento de aguas y alcantarillado, etc. La nueva normativa a implantar en 1993 (1994 para Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes) prevé el control integrado del patrimonio municipal, mediante el nuevo sistema contable. Para que dicho control opere, será precisa en numerosos Ayuntamientos la realización de un inventario y sobre todo modificar los flujos documentales de modo que las mejoras o modificaciones del patrimonio sean recogidas en el inmovilizado. También se hace preciso el desarrollo de criterios contables de aplicación uniforme en todos los Ayuntamientos.

3.6.- CUENTA GENERAL DE PRESUPUESTOS

Los Ayuntamientos han indicado en el cuestionario remitido la fecha de aprobación por el Pleno de la Cuenta General de los Presupuestos de 1990 . La normativa vigente en 1990 especifica que dicha aprobación debía producirse con anterioridad al 1 de setiembre de 1991.

Un total de 79 Ayuntamientos aprobaron la Cuenta General de Presupuestos con posterioridad a la citada fecha. En 58 de estos Ayuntamientos la aprobación se produjo con posterioridad a 31 de diciembre de 1991.

3.7.- EJECUTIVA

Los Ayuntamientos han informado sobre si apremiaban los recibos o liquidaciones no cobrados en periodo voluntario de cobro. Se han valorado como incidencias las contestaciones negativas y las que especificaban que tan sólo ocasionalmente se utilizaba la vía ejecutiva de recaudación.

Esta incidencia es casi general en los Ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, que no pueden sostener un servicio propio de recaudación ejecutiva. Estos Ayuntamientos debieran utilizar los servicios de recaudación ejecutiva de las Haciendas Forales.

3.8.- OFERTA DE EMPLEO

El cuestionario completado por los Ayuntamientos incluía un apartado para indicar si el Ayuntamientos dio publicidad a la oferta pública de empleo de 1990. Se ha valorado como incidencia tanto la contestación negativa como el hecho de no contestar a dicha cuestión.

Al aprobar el presupuesto de personal y el correspondiente anexo de plantilla y retribuciones, el Ayuntamientos decide implícitamente la cobertura de las plazas vacantes a la fecha de aprobación del presupuesto. Esta decisión debe ponerse en conocimiento de los posibles aspirantes a través de la publicación de la oferta anual de empleo. Es práctica habitual en algunos municipios publicar simultáneamente el presupuesto definitivo y la mencionada oferta de empleo.

Esta variable se ha valorado en los 65 municipios con más de 5.000 habitantes, observándose su incumplimiento en 21 de ellos. En los Ayuntamientos menores se ha estimado que el número de posibles vacantes sería poco significativo, no comprobándose este aspecto.

3.9.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

Se ha solicitado de los Ayuntamientos la remisión de una copia del modelo que han de presentar a las correspondientes Haciendas Forales. Tan sólo 59 Ayuntamientos enviaron dicho modelo.

La verificación por las Haciendas Forales de que el IVA repercutido por los proveedores de la administración municipal se declara efectivamente, requiere que los Ayuntamientos remitan a dichas Haciendas una declaración especificando el volumen de compras realizadas a cada proveedor.

3.10.- ORDENANZAS

Mediante un modelo específico se interesó de los Ayuntamientos información sobre las fechas en que se publicaron las ordenanzas vigentes durante 1990. Se ha valorado negativamente la publicación en fecha posterior al 1 de enero de 1990.

Mediante diversas Normas Forales se modificó en 1989 la normativa que regula la tributación local. Dichos cambios requerían que cada Ayuntamientos modificara la totalidad de sus ordenanzas, para adaptarlas al nuevo marco normativo. Las normas tributarias entran en vigor en el momento en que se publican, por lo que las nuevas ordenanzas debían haberse tramitado de modo que fuera posible su publicación antes del 1 de enero de 1990.

Un total de 32 Ayuntamientos publicaron con retraso las ordenanzas correspondientes a 1990.

3.11.- CONTRATACIÓN

Se ha recabado de los Ayuntamientos una serie de datos sobre los contratos más significativos adjudicados durante 1990. Los datos a especificar se referían al sistema de adjudicación, las fechas de aprobación del expediente, publicación, adjudicación y recepción de la obra e importes del proyecto, adjudicación y liquidación. Se ha comprobado que el sistema de adjudicación utilizado es el establecido en la normativa vigente y que las fechas antes citadas se producían en una secuencia lógica. La no remisión de los anteriores datos se ha valorado también como incidencia.

Casi la mitad de los Ayuntamientos presentan incidencias en este apartado.

La normativa que regula las adquisiciones municipales especifica que podrá utilizarse la contratación directa en aquellos contratos de obra cuyo presupuesto no supere el 5 % de los ingresos corrientes. En los Ayuntamientos con más de 1.000 millones de ingresos corrientes, el límite se establece en 50 millones de pesetas. Muy pocas obras superan este último importe en el ámbito municipal, por lo cual la práctica totalidad de las obras de los grandes Ayuntamientos se realizan por este sistema que limita el principio de concurrencia.

4.- CUENTAS ANUALES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Como ya se ha comentado anteriormente, junto a la cumplimentación de determinados cuestionarios que han servido para confeccionar los apartados anteriores de este informe, se ha requerido de los Ayuntamientos la remisión de sus Cuentas Anuales del ejercicio 1990. A partir de esa información, se han elaborado los cuadros que figuran en los anexos, mediante un formato que disgrega la ejecución de presupuestos cerrados de la liquidación del presupuesto corriente, tal y como establece la normativa que entra en vigor en 1993.

Se han agregado las Cuentas Anuales de los 245 Ayuntamientos de la Comunidad, para el conjunto de ésta y para cada Territorio Histórico y preceden a las Cuentas Anuales individuales de cada uno de ellos.

Sobre las Cuentas Anuales Agregadas, y para los estratos de población definidos en la Introducción, se han obtenido una serie de ratios, utilizando la población de derecho del ejercicio 1990, facilitada por el Instituto Nacional de Estadística, y que son los siguientes:

1. Gasto corriente: Caps. I, II y IV de gastos.
2. Carga financiera: Caps. III y IX de gastos.
3. Presión fiscal I: Caps. I, II de ingresos.
4. Presión fiscal II: Caps. I, II y III de ingresos.
5. Resultado corriente: Caps. I a V de ingresos - Caps. I a IV de gastos.
6. Resultado de 1990: Resultado del presupuesto para 1990.
7. Remanente Tesorería: Remanente de tesorería 31.12.90.
8. Endeudamiento: Principal pdte. préstamos 31.12.90.
9. Financ. Instituc.I: Cap. IV de ingresos.
10. Financ. Instituc.II: Caps. IV y VII de ingresos.

En todos los casos el denominador utilizado es el número de habitantes.

Adicionalmente a estos cálculos por habitante, se han obtenido los siguientes ratios, en porcentaje:

11. % Insolvencia:
Saldo pendiente cobro a 31.12.90 por resultas corrientes / Cap. I a V de ingresos.

12. % Financi. Instituc.:
Cap. IV de ingresos / Caps. I a V de ingresos.

RATIOS ECONÓMICOS POR TRAMOS DE POBLACIÓN

	TODOS	Más de 100.000 Hbts.	Entre 30.000 y 100.000 Hbts.	Entre 15.000 y 30.000 Hbts.	Entre 5.000 y 15.000 Hbts.	Entre 2.000 y 5.000 Hbts.	Entre 500 y 2.000 Hbts.	Menores de 500 Hbts.
Nº Ayuntamientos	245	4	8	17	36	31	85	64
Nº Habitantes	2.159.701	888.920	409.807	339.892	308.150	105.437	89.403	18.092
1 GASTO CORRIENTE	51.179	58.806	44.637	48.619	45.740	43.214	43.702	48.712
2 CARGA FINANCIERA	9.849	15.924	5.501	5.557	6.035	6.178	4.154	4.983
3 PRESIÓN FISCAL I	16.926	19.354	16.364	16.305	14.471	12.836	12.253	10.850
4 PRESIÓN FISCAL II	27.833	32.133	23.489	27.367	25.385	24.105	21.221	19.862
5 RESULTADO CORRIENTE	10.215	7.836	8.475	10.607	10.801	15.595	25.279	43.358
6 RESULTADO 1990	3.528	3.241	7.219	3.163	496	196	3.363	12.773
7 REMANENTE 31 DIC 90	12.355	10.853	17.513	11.730	8.694	6.428	19.256	43.847
8 ENDEUDAMIENTO	44.610	59.768	38.740	31.992	37.257	27.085	21.037	13.729
9 FINANCIACIÓN INSTITUCIONAL I	36.040	39.011	31.818	33.282	33.198	33.748	43.219	63.836
10 FINANCIACIÓN INSTITUCIONAL II	43.490	41.716	36.756	40.354	43.402	61.043	70.457	108.076
11 INSOLVENCIA	9	10	10	10	5	6	4	1
12% FINANCIACIÓN INSTITUCIONAL	55	54	57	54	55	55	61	69

AYUNTAMIENTO DE CEUTA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las Cuentas Anuales rendidas por el Ayuntamiento de Ceuta. Esta Corporación tiene una consideración singular, puesto que no está integrada en ninguna Comunidad Autónoma.

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Estructura presupuestaria

Ceuta tiene una población de 68.970 habitantes y un presupuesto de 6.049 millones de pesetas.

En el presupuesto de ingresos aprobado, los ingresos procedentes de operaciones corrientes representan el 86 % de los ingresos totales, correspondiendo el 14 % restante a las operaciones financieras previstas.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes suponen el 77 % de los gastos totales, seguidos por los de capital, con un 19 %, quedando un 4 % para la amortización de los préstamos pendientes.

Las resultas de ejercicios cerrados importan, tanto en ingresos como en gastos, el 50 % del presupuesto refundido, estimándose muy elevadas.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 546 millones de pesetas, que suponen el 5 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones asciende a un 9 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de créditos de gastos se produjeron principalmente en los capítulos destinados a inversiones reales, en un 53 % de aquéllas, a retribuciones de personal, en un 24 %, y a la compra de bienes y servicios por el resto.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

Los derechos liquidados por operaciones corrientes ascienden al 68 % de los totales, correspondiendo un 4 % a los procedentes de operaciones de capital y un 28 % a los de operaciones financieras.

Las obligaciones reconocidas por operaciones corrientes suponen el 63 % del total, destinándose el 17 % a operaciones de capital y el 20 % restante a las de naturaleza financiera, para amortizar los préstamos pendientes (el 12 %) y para variaciones de activos financieros (el 8 %).

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

La liquidación del presupuesto tiene un superávit de 259.769.012 pesetas. Este superávit se produce como consecuencia del de operaciones corrientes y los préstamos concertados, así como por el efecto positivo de las resultas de ejercicios cerrados. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	243.802 ptas.
- Por ejercicio corriente	259.525.210 ptas.
Suma (superávit)	259.769.012 ptas.

e) Indicadores significativos.

- La formación bruta de capital ha sido de 956 millones de pesetas, lo que supone el 7 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, las obligaciones reconocidas excedieron a los derechos liquidados en 90 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas por operaciones corrientes representaron el 9 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido nula y la variación neta de pasivos financieros ha sido positiva (mayor endeudamiento), con 742 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

No se ha rendido esta cuenta, que tiene la condición de obligatoria.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Se ha rendido la cuenta de VIAP y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Esta cuenta ha sido rendida y debidamente aprobada por el Pleno.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

3.2.1. Las obligaciones reconocidas superan los créditos autorizados, según la liquidación del presupuesto.

3.2.2. Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones recibidas en la Corporación, así como los gastos vinculados a estos recursos.

3.2.3. No se han rendido las conciliaciones del acta de arqueo, a 31 de diciembre de 1990, con las notas o extractos de las entidades bancarias correspondientes.

AYUNTAMIENTO DE MELILLA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las Cuentas Anuales rendidas por el Ayuntamiento de Melilla. Esta Corporación tiene una consideración singular, puesto que no está integrada en ninguna Comunidad Autónoma.

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Estructura presupuestaria

Melilla tiene una población de 62.569 habitantes y un presupuesto de 4.816 millones de pesetas.

Los ingresos procedentes de operaciones corrientes suponen el 92 % de los ingresos totales previstos, siendo los ingresos tributarios, con el 73 % del total, la partida más significativa. Los ingresos por operaciones de capital ascienden al 7 % del total y tan sólo un 1 % las financieras.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes suponen el 85 % de los gastos totales, seguidos por los de capital, con un 12 %, siendo un 3 % destinado a operaciones financieras.

Las resultas de ejercicios cerrados representan, en ingresos, el 33 % del presupuesto refundido y, en gastos, un 32 %.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 672 millones de pesetas, que suponen el 9 % de los créditos iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modificaciones asciende a un 14 % de los créditos iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presupuestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de los créditos de gastos se produjeron prinpalmente en los capítulos destinados a inversiones reales, en un 44 % de aquéllas, a gastos de personal, en un 22 %, y a la compra de bienes y servicios, en un 25 % .

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El contraído de los derechos por operaciones corrientes es el 95 % de los totales, correspondiendo un 4 % a los procedentes de operaciones de capital y un 1 % a los de operaciones financieras.

El contraído de las obligaciones por operaciones corrientes suponen el 80 % del total, destinándose el 17 % a operaciones de capital y el 3 % restante a las financieras, para amortizar los préstamos pendientes (el 1 %) y para variación de activos financieros (el 2 %).

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

La liquidación de los presupuestos tiene un superávit de 240 millones de pesetas. Este superávit se produce como consecuencia del de resultas de ejercicios cerrados, que compensa el resultado negativo del ejercicio corriente. El desglose de este resultado es el siguiente:

- Por resultas de ejercicios cerrados	562 millones de ptas.
- Por ejercicio corriente	(322) millones de ptas.
Suma (superávit)	240 millones de ptas.

e) Indicadores significativos

- La formación bruta de capital ha sido de 824 millones, lo que supone el 11 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron a las obligaciones reconocidas en 136 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de capital, representaron el 16 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido de 58 millones de pesetas y la variación neta de pasivos financieros ha sido negativa, con 56 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Se ha rendido esta cuenta, pero no consta que haya sido aprobada por el Pleno de la Corporación

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

No se ha rendido esta cuenta, que tiene la condición de obligatoria.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Se ha rendido la cuenta de VIAP, pero no ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.1.4.- Cuenta de Tesorería.

Esta cuenta ha sido rendida, pero no ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

3.2.1. No consta que se hayan rendido las cuentas de recaudación en periodo ejecutivo.

3.2.2. Las cuentas de la recaudación en periodo voluntario no han sido aprobadas por el Organo competente.

II.3.- CONTRATACION ADMINISTRATIVA.

II.3.1.- ÁMBITO Y OBJETIVOS.

La finalidad de este apartado es analizar la actividad contractual, en orden a su sometimiento a los principios y normas de buena gestión a que están sujetos los órganos de contratación local de aquellas Comunidades Autónomas que no tienen constituido aún su correspondiente Organo de Control Externo.

Para el ejercicio del control externo sobre la actividad de las Entidades Locales, éstas deben poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas, mediante relación anual, los contratos formalizados y facilitar aquéllos que por su naturaleza, cuantía y forma de adjudicación se determinan como de "particular fiscalización", por los arts. 39 y 40 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En cumplimiento de los preceptos mencionados, para el ejercicio de 1990 se ha notificado la celebración de 1.294 contratos, por un importe total de 163.481 millones de pesetas.

Los contratos formalizados por las Corporaciones Locales se refieren a la ejecución de obras, la prestación y la instalación de servicios, la obtención de suministros y otros fines de naturaleza administrativa especial, entre los que destacan la adquisición y enajenación de bienes del patrimonio local, los préstamos o créditos y los de asistencia técnica o de servicios concertados con empresas consultoras.

La normativa de aplicación a la contratación viene determinada por la legislación básica estatal, por la legislación ordinaria de las Comunidades Autónomas y del Estado y por las ordenanzas municipales que sobre la materia pudiesen dictar las Corporaciones Locales.

El marco normativo estatal ha sido modificado para el ejercicio de 1990 por la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales, siendo de destacar, las variaciones siguientes:

* Las referentes a la publicidad de las licitaciones a insertar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

* Las relativas a los procedimientos selectivos de los contratistas.

* Las determinantes de los supuestos de suspensión de la clasificación empresarial.

El examen y comprobación de los expedientes contractuales seleccionados se ha extendido a la verificación del cumplimiento de la legalidad y de la regularidad y se ha concretado, a su vez, en el estudio de las distintas fases de su desarrollo:

a) La determinación del objeto contractual.

b) La selección del adjudicatario y fijación del precio justo.

c) La ejecución de su contenido.

d) La recepción del objeto.

II.3.2.- RESULTADOS DEL EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.

La información sobre la actividad contractual de las Corporaciones Locales se sintetiza en los cuadros 1 a 5 que figuran más adelante.

Los contratos administrativos formalizados durante el ejercicio de 1990 y que reunen las condiciones establecidas en el art. 39 de la Ley de Funcionamiento de este Tribunal para ser objeto de particular fiscalización, se presentan clasificados en el cuadro 1., por columnas y líneas, en atención a la cuantía de sus presupuestos por contrata, a la forma de selección del adjudicatario y a la naturaleza u objeto del contrato. También figuran, con igual presentación, los contratos que han sido seleccionados, de entre aquellos que han sido formalizados, para su examen y comprobación singular.

Hay que señalar que, del ejercicio de 1990, han sido examinados por este Tribunal 201 contratos, que suman un importe de 33.755 millones de pesetas, frente a los 131 contratos que, por importe conjunto de 14.349 millones de pesetas, fueron examinados y registrados en la Memoria Anual correspondiente al ejercicio de 1989. A pesar de haber sido requeridas expresamente, ocho Corporaciones (Ayuntamientos de Fuenlabrada, Gijón, León, Monzon, Morata de Tajuña, Pina de Ebro, Santoña y Valdemoro) no han remitido 29 expedientes contractuales, por un importe de 4.093 millones de pesetas, cuya relación figura en el Anexo II.3-1.

CUADRO 1. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS LOCALES -1990. (En millones de pesetas)

CRITERIOS	Importe presupuesto contrata				Objeto				Forma			TOTALES
	Inferior a 25	Entre 25 y 50	Entre 50 y 100	Superior a 100	Obras	Serv.	Sum.	Otros.	Sub.	Conc.	C. Dire.	
NUMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS	48	619	288	339	1.124	57	62	51	87	451	756	1.294
IMPORTE	532	20 951	20 196	121 802	123 590	30 456	3.088	6.347	15.810	107.454	40.217	163.481
NUMERO DE CONTRATOS EXAMINADOS	9	58	45	89	120	20	26	35	31	91	79	201
IMPORTE	113	2 130	3 170	28 342	22 189	4 592	1.983	4.991	6.880	19.589	7.286	33.755

De los datos del cuadro nº 1 se deduce que:

a) La ejecución de obras públicas ocupa el primer lugar en la finalidad de la contratación local.

b) La selección del contratista adjudicatario se realiza preferentemente por concurso público, seguido por contratación directa.

c) Los contratos superiores a 100 millones de pesetas, suponen el 26% del número de los formalizados y el 74% del importe total.

Del examen de los expedientes contractuales seleccionados, se han deducido los aspectos siguientes:

a) La necesidad de definir, con mayor precisión, el objeto del contrato, mediante una cuidada elaboración de los proyectos de obras, de los anteproyectos de explotación, de los estudios económico-administrativos de los servicios públicos y de la propuesta razonada de la necesidad de los suministros.

b) La existencia de deficiencias importantes en la selección de las empresas adjudicatarias, fundadas en la ausencia de justificación de la clase y forma procedimental, y en la falta de rigor de tramitación y resolución, con incumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y, en definitiva, de legalidad.

c) La presencia de anomalías en la recepción del objeto del contrato, y también en el cumplimiento de los plazos parciales y totales de su consecución, predeterminados en los pliegos de cláusulas o de bases, en los programas correspondientes y en los documentos de formalización contractual.

Las irregularidades observadas en el examen de los expedientes contractuales, (una vez tomadas en consideración las alegaciones formuladas por las Corporaciones Locales en el trámite de audiencia), se relacionan detalladamente en los Anexos II.3-2 al II.3-5

II.3.2.1.- Contratos de obras.

La construcción de obras es una parte importante de la actividad de las Corporaciones Locales. El cuadro 2 detalla su contratación administrativa y algunos datos referidos a la misma.

CUADRO 2 CONTRATOS DE OBRAS - 1990 (En millones de pesetas)

CRITERIOS		Inferior a 25		Entre 25 y 50		Entre 50 y 100		Superior a 100		TOTALES	
		Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
SUBASTA	Notificados(*)	2	41	9	332	9	625	60	13.872	80	14.870
	Examinados	0	0	2	75	4	234	18	5.631	24	5.940
CONCURSO	Notificados(*)	2	20	11	404	151	11.096	184	61.026	348	72.546
	Examinados	1	20	1	46	11	852	30	10.880	43	11.798
C. DIRECTA	Notificados(*)	18	307	535	18.041	95	6.300	48	11.526	696	36.174
	Examinados	2	49	24	924	13	943	14	2.535	53	4.451
TOTALES	Notificados(*)	22	368	555	18.777	255	18.021	292	86.424	1.124	123.590
	Examinados	3	69	27	1.045	28	2.029	62	19.046	120	22.189

(*) Contratos que se han notificado al Tribunal en virtud de lo establecido en el art. 39 de la Ley de Funcionamiento.

Del análisis de los contratos de obra destacan los siguientes aspectos:

- Por razón de su cuantía, los contratos de importe superior a 100 millones de pesetas, representan el 70% del importe total formalizado.

- Por la forma de selección del contratista, prima el concurso, seguido en importancia por la contratación directa.

- El concurso es preferentemente el sistema selectivo de los contratos de mayor cuantía, mientras que la contratación directa se reserva para los de menor importe.

Los datos del cuadro nº 2 estan en concordancia con las modificaciones normativas de la regulación contractual introducidas por la Ley 4/1990, de 29 de junio, de los Presupuestos Generales del Estado, que habilitan al concurso como forma de adjudicación "normal" de las obras públicas, al igual que anteriormente lo era la subasta, y a su vez eleva la cuantía del presupuesto por contrata a 50 millones de pesetas que permite acudir a la contratación directa para la selección de las empresas adjudicatarias.

Se han examinado 120 expedientes tramitados por las Entidades Locales para la contratación de obras públicas, con un importe global 22.189 millones de pesetas.

Las anomalías observadas más destacables se refieren, respectivamente, a los sujetos de la relación contractual, a la determinación de la oferta, a la selección del contratista, a la adjudicación y formalización del contrato, a la ejecución efectiva de las obras y sus variaciones, y a la recepción del objeto o, en su caso, a la terminación anormal del contrato. Las citadas irregularidades se refieren a los expedientes relacionados en el anexo II.3-2.

A) Los sujetos de la relación contractual.

Las partes intervinientes son las Administraciones Locales y las empresas individuales o societarias.

Las Administraciones Públicas Locales realizan sus contratos por medio de sus órganos competentes (Pleno, Presidente, Alcalde) o los trasladan por acuerdos de desconcentración o de delegación (Juntas Municipales de Distrito, Comisiones de Gobierno, Concejales, etc..). En algunos de estos últimos supuestos, no se indican las circunstancias de la delegación.

Las empresas individuales o societarias han incurrido en irregularidades en más del 50% de los contratos examinados, siendo las más frecuentes las siguientes:

- En 23 Corporaciones no se justifica en el expediente la certificación acreditativa de la clasificación empresarial expedida por el Registro Oficial, documento que exime a los contratistas de acreditar su personalidad y su capacidad técnica, económica y financiera, y les dispensa de la prestación de las garantías provisionales en las licitaciones.

- 6 Corporaciones (Diputaciones de Avila y Cáceres y Ayuntamientos de Almansa, Cuenca, San José y Torrelavega) no dejan constancia en el expediente contractual de la persona que actúa frente a la Administración, sea mediante poder bastante inscrito en el Registro Mercantil o Documento Nacional de Identidad, sea, en su caso, por documento autorizado y justificativo de la Agrupación Temporal de Empresas, en el que conste su representante y la participación de cada una.

- Los órganos de contratación local de 13 Corporaciones no han exigido en las fases de licitación o en las de formalización, las declaraciones o documentación justificativa, de no estar incursos en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad y de

estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

B) La determinacion de la oferta.

Para la presentación de la oferta contractual, los organos locales determinan el objeto, definiéndolo en los documentos técnicos y en las relaciones jurídicas bilaterales, redactando las cláusulas y condiciones, así como autorizando el expediente contractual y el de gasto.

En la elaboración, aprobación y replanteo de los proyectos técnicos de obras se han observado anomalías en 23 Corporaciones, que suponen el 40% de los expedientes examinados. Estas anomalías son las siguientes, referidas tanto a la obra a realizar como a su precio:

- Imprevisiones cualitativas y cuantitativas importantes, que afectan a la propia definición del objeto, cuando se licita conjuntamente la confección del proyecto técnico y su ejecución.

- El fraccionamiento del objeto sin acreditar la justificación suficiente o alegando motivaciones económicas o de financiación periódica; el fraccionamiento, en algunos casos, da lugar a posteriores adjudicaciones directas. Esta anomalía se ha producido en la Diputación Provincial de León, en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el Ayuntamiento de Soria y en la Diputación Provincial de Toledo.

- La determinación deficiente del presupuesto de ejecución, por ser contradictorios sus importes en los documentos examinados (proyecto, autorización, Boletines Oficiales), por incluir partidas improcedentes (previsión de incrementos impositivos u honorarios técnicos) o por excluir partidas procedentes (Seguridad e Higiene en el trabajo).

- La inexistencia generalizada del contraste de los proyectos, mediante su supervisión por Oficina competente.

- La inexistencia del trámite de autorización o la aprobación procedente o su falta de constancia en el expediente y de la publicidad reglada en normas de Régimen Local o de Ordenación Urbana.

- La falta de replanteo previo, presentándose a posteriori problemas de naturaleza geofísica de los terrenos, de su disponibilidad por servidumbre, autorizaciones o concesiones (Hidrográficos, tendidos eléctricos, telefónicos, sanitarios).

- La redacción del proyecto y posterior dirección de las obras por técnicos ajenos a la propia Corporación, sin acreditar su necesidad, ni la tramitación de las designaciones de asistencia técnica procedente.

En las cláusulas reguladoras de las relaciones bilaterales que, aceptadas por los licitadores y, en definitiva, por el contratista adjudicatario, constituyen el pliego de condiciones, de aplicación entre las partes, se observan las anomalías siguientes:

- Las que afectan a la propia existencia, identificación o autenticidad del pliego y a su diferenciación entre los de carácter particular, general o tipo. (Se ha observado esta anomalía en la Diputación de Badajoz).

- Las referentes a su adaptación a la normativa vigente y, en concreto, al Real Decreto Legislativo 931/1.986, de 2 de mayo, de transposición a la legislación de Contratos de las directivas de la Comunidad Europea. (Ocurre en contratos de la Diputación de Toledo y del Ayuntamiento de Eivissa).

- Las relativas al contenido del pliego, por deficiencias en la reseña del objeto del contrato y su presupuesto por contrata, en la determinación de los requisitos y condiciones de los licitadores o proponentes (entre ellas, los de clasificación empresarial o capacidad técnica, económica y financiera), en la procedencia de la forma de selección del adjudicatario (supuestos de excepción de la licitación en favor de la concertación directa), en la indicación concreta de los criterios selectivos, mejoras, variaciones o soluciones susceptibles para la realización del objeto del concurso, y finalmente en la falta de constancia expresa de la existencia suficiente de consignación y financiación en los presupuestos. (Se han registrado esta clase de irregularidades en los contratos de las Diputaciones de Badajoz y Segovia y en los Ayuntamientos de Avila, Calviá, Eivissa, Madrid y Tomelloso).

En la aprobación del expediente contractual y de autorización del gasto se han observado irregularidades en más del 30% de los contratos examinados. Afectan a los siguientes aspectos:

- En 9 Corporaciones no existe certificación sobre la viabilidad del proyecto, de disponibilidad de los terrenos y de los dictámenes preceptivos y previos de la Asesoría Jurídica de la Corporación sobre el pliego de condiciones y de la Intervención, sobre el control crítico del gasto.

- Deficiencias en relación a la constancia o contenido expresivo y suficiente de la resolución del órgano de contratación competente para la aprobación del expediente, o de la autorización del gasto y de la apertura del procedimiento de adjudicación. Así mismo, afectan a la motivación justificativa de la tramitación urgente y a la declaración sobre los compromisos de gastos plurianuales. (Se ha observado esta anomalía en los Ayuntamientos de Badajoz, Eivissa, Pozuelo de Alarcón, San José y Sisante).

- Falta de pronunciación expresa sobre la forma de selección en los acuerdos de autorización, determinándose, en algún caso, "a posteriori" en los anuncios.

- Aplicación anticipada de la Ley 4/1990, de 29 de Junio, de Presupuestos Generales del Estado (que modifica los procedimientos selectivos) no justificando el uso del concurso o realizando alegación indebida o confusa a sus supuestos habilitantes. (Así ha ocurrido en el Ayuntamiento de Badajoz).

- Adjudicación directa del objeto del contrato, sin motivación suficiente en alguno de los supuestos admitidos en la normativa anterior o en la resultante de la Ley 4/1990, o rendido bajo el supuesto concreto de la urgencia, sin acreditar los requisitos exigidos. (Así ocurre en las Diputaciones de León y Teruel y en el Ayuntamiento de Calviá).

- La ausencia de transparencia en la gestión corporativa mediante la inserción en los Boletines Oficiales de las Provincias de los acuerdos y resoluciones de autorización, antes referidos, a los efectos de que puedan ser reclamados, dejando constancia en las actuaciones procedimentales del resultado de la exposición y, en caso positivo, de las medidas adoptadas. (Así ha sucedido en los Ayuntamientos de Calviá y Mérida y en la Diputación de Badajoz).

C) Selección, adjudicación y formalización del contrato.

Con carácter general, el procedimiento contractual ha sido el ordinario, pero cuando se ha acudido a los de excepción, sea por la urgencia o por la emergencia de las obras a realizar, la justificación debidamente motivada no ha existido o no se ha hecho constar con suficiencia en la mayoría de los supuestos examinados. En los supuestos de "tramitación urgente", no se concretan los motivos de la necesidad reconocida e inaplazable o las razones de interés público. (Se han observado estas irregularidades en las Diputaciones de Badajoz y Caceres y en los Ayuntamientos de Badajoz, Fuente del Alamo y Madrid).

El principio de publicidad de las convocatorias de las ofertas, a los efectos de licitación por subasta o concurso, se ha aplicado por las Corporaciones Locales con regularidad. Las excepciones hacen referencia a la no utilización de todos los medios de comunicación oficial obligatoria (entre ellos, el de la CEE cuando supera el umbral cuantitativo en ECUS señalado reglamentariamente), a la redacción confusa de los anuncios (duda sobre si se ha de licitar el proyecto además de su ejecución, indeterminación de la clasificación empresarial o de las condiciones técnicas, económicas y financieras de los licitadores) y a la improcedente reducción de los plazos de presentación de las plicas. Así ha ocurrido en las Diputaciones de Badajoz y Toledo y en el Ayuntamiento de Mérida.

En la actuación de la mesa de contratación, las anomalías más frecuentes son: no reseñar su composición, la presencia de sus miembros o no indicar la delegación con que actúan, no dejar constancia mediante el acta correspondiente de lo actuado y de sus incidencias (resultado de los documentos presentados y su calificación y de la admisión o rechazo de las proposiciones) y no realizar la adjudicación provisional, no ser explícita o ser temeraria. (Se dan estas circunstancias en contratos de la Diputación de Huesca y de los Ayuntamientos de Eivissa y Madrid).

En la recepción de las proposiciones de las empresas capacitadas cuando la selección es directa, las irregularidades se producen en el 20% de los expedientes examinados, referidos a 12 Corporaciones: Ayuntamientos de Fuente Alamo (Albacete), Getafe (Madrid), Almansa Albacete), Ibiza (Baleares), Fraga (Huesca), Cangas de Narcea (Asturias), La Villa de Don Fadrique (Toledo), Calatayud (Zaragoza), Burgos y Madrid y Diputaciones Provinciales de Cáceres y Valladolid. Se extienden a la falta de la consulta previa o su constancia en el expediente, a que dicha prospección se realice con anterioridad a la autorización del proyecto y del pliego, y a que las ofertas posteriormente aceptadas, formulen alteraciones en el objeto, en las condiciones y en el precio (superior al señalado en el pliego).

En las resoluciones de adjudicación, se han advertido anomalías en el 20% de los expedientes, referidas a 12 Corporaciones: Diputaciones Provinciales de Segovia, León, Badajoz, Avila y Huesca y Ayuntamientos de Ferreries (Baleares), Madrid, Puertollano (Ciudad Real), Tomelloso (Ciudad Real), Avila, Soria e Ibiza (Baleares), y relativas a la falta de constancia del procedimiento contradictorio en supuestos de temeridad, deficiente ponderación entre los criterios objetivos y predeterminados en el pliego y las proposiciones de los licitadores, inexistencia, no constancia, anticipación o retraso en la adopción del acuerdo resolutivo, adopción de éste introduciendo condiciones modificatorias del pliego, del precio o del objeto o adjudicando por tipo superior al de licitación, y la fundamentación improcedente de la resolución (ser contratista de las fases anteriores, sin atenerse a los criterios del pliego ni a los informes técnicos previstos en el mismo), así como llegar a esta fase decisoria sin haberse resuelto la consignación presupuestaria, la financiación o las previsiones sobre gastos plurianuales.

En algunos supuestos (como en las Diputaciones de Toledo y Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida), la transparencia en la actuación contractual de esta fase decisiva no se respeta por los órganos locales en dos aspectos: uno, por no realizarse la inserción de la adjudicación en los medios de comunicación donde apareció la licitación, y otro porque no al no ser publicado debería comunicarse a cada uno de los proponentes o, en su caso, de los licitadores.

Las comunicaciones a los adjudicatarios se realizan en forma. Las excepciones son relativas a la cuantificación reglada de la fianza definitiva y de los gastos de publicidad contractual y a la demora en sus traslados, produciéndose asimismo retraso en la formalización.

Las anomalías en la formalización de los contratos son principalmente: falta de su autorización por el Secretario de la Corpora-

ción, deficiencias en su contenido y la no aceptación expresa del pliego por el contratista, la formalización con el representante de una de las empresas de las de la Unión Temporal adjudicataria, o el incumplimiento de dicha obligación de formalización. (Así ocurre en la Diputación de Huesca y en los Ayuntamientos de Calviá, Palencia y Sisante).

D) La ejecucion de los contratos.

En el examen del cumplimiento de los compromisos contraídos, se han observado anomalías que se señalan a continuación:

- En la mitad de los expedientes examinados, no se ha dejado constancia de la realización de la comprobación del replanteo, en unos casos, mientras que, en otros, se han ejecutado con retraso por falta de disponibilidad de los terrenos o de las autorizaciones de otros Organismos.

- La misma proporción de irregularidades se han detectado en 10 Corporaciones, con relación a los periodos de ejecución de las obras, de los plazos parciales o el total, prefijados en los pliegos, en los contratos o en los programas de trabajo. En la mayoría de los supuestos no constan las motivaciones o la ampliación no está expresamente autorizada por el Organo de Contratación (aún cuando en algún supuesto haya propuesta del director técnico y en otras pueda deducirse una conformidad implícita de la expedición y autorización de las certificaciones de obras), produciéndose perjuicios a las partes, por la falta de disponibilidad del objeto.

En cuanto a los compromisos contraídos, el Tribunal ha comprobado que determinadas Corporaciones Locales no han facilitado las certificaciones o las relaciones valoradas, así como tampoco han remitido las órdenes o mandamientos de pago correspondientes. (Diputaciones de Badajoz, León y Toledo y Ayuntamientos de Cuenca, Mérida y San José).

En la ejecución de los contratos se producen anomalías en la mitad de los expedientes, y son referentes a:

- La realización de las obras, al no haberse iniciado o, posteriormente, haberse paralizado, como ha sucedido en 5 Corporaciones.

- Las certificaciones expedidas, por realizarse con retraso, fuera del plazo de vigencia temporal (anterior a la adjudicación, después de iniciado expediente por incumplimiento etc.), sin justificación en las relaciones valoradas o sustituidas por facturas, y por obedecer a aportaciones materiales (maquinarias, instalaciones o acopios) no justificadas, resultantes de condición impuesta por el contratista para la aceptación de la oferta o sin acreditar su aval; así se ha observado en 5 Corporaciones: Ayuntamientos de Fraga (Huesca), Alcalá de Henares (Madrid), Mérida (Badajoz), Tomelloso (Ciudad Real) y Albacete.

- En 11 Corporaciones, los reconocimientos de la obligación y su abono efectivo al adjudicatario, por percibirse por persona distinta del apoderado de la Unión Temporal de Empresas, abonarse con retraso (encontrarse actualmente pendiente de pago etc.) y poder suscitar intereses de demora, abonarse por el concepto de partidas alzadas a justificar, sobre todo las referentes a "posibles modificaciones impositivas" sin haberse producido, y por retenciones por honorarios técnicos y gastos de ensayos o de controles de calidad, sin acreditar la procedencia y realización efectiva.

E) Las variaciones contractuales.

En los expedientes examinados se han observado irregularidades que hacen referencia a variaciones fácticas por medio de expedición de certificaciones, equivalentes a la baja obtenida en la licitación, realizadas con anterioridad a su autorización o una vez transcurrido el plazo de vigencia del contrato, autorizadas sin la previsión presupuestaria necesaria o que no llegan a formalizarse, así como otras que alteran sustancialmente el proyecto inicial o lo incrementan por encima del 20 por 100 del importe del contrato. (Se han observado este tipo de anomalías en los contratos de las Diputaciones de Toledo y León y de los Ayuntamientos de Pielagos, Segovia y Torrelavega).

Las modificaciones contractuales referidas incorporan anomalías procedimentales que afectan o incrementan su transcendencia, ya que la causa de interés público no se explicita, en la tramitación se ha prescindido de las propuestas técnicas o estas no acreditan la necesidad u obedecen a defecto de inicio o imprevisión y no se acreditan los informes de la Secretaría e Intervención de carácter previo y preceptivo y, en su caso, los de la misma naturaleza del Organo Consultivo Superior de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, del Consejo de Estado. (Así ocurre en los expedientes examinados de las Diputaciones de León y Toledo y de los Ayuntamientos de Almansa, Cuenca, Madrid, Piélagos y Torrelavega).

F) Terminacion del contrato.

En el 40% de los expedientes examinados se producen anomalías relativas a la terminación del contrato.

En 7 Corporaciones, las irregularidades se refieren a la falta de realización o de constancia en expediente de las recepciones, a su acreditación por acta con demora, a la falta de intervención de los órganos de control en dichas recepciones, sea interno o de organismos externos previstos en los pliegos, y a la devolución de la fianza definitiva sin acreditar la recepción.

En los 2 expedientes de obras realizadas por Administración en Jerez de los Caballeros, no consta que el reconocimiento, la comprobación y la liquidación de las mismas se haya realizado por técnico-facultativo distinto del director de la obra.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no consta que los incumplimientos, irregularidades o anomalías relacionados con la contratación administrativa hayan generado la exigencia de responsabilidades por las partes interesadas; sin embargo en los supuestos concretos de falta de disponibilidad de los terrenos, que impidió el inicio de las obras, de suspensión definitiva de las obras o de otros incumplimientos obligacionales se acudió a la resolución contractual.

En Torrelavega se ha observado que cuando los expedientes resolutivos obedecen a "mutuo acuerdo", no se justifica ni la exculpación del contratista, ni el interés público u otra circunstancia excepcional.

Tanto en el supuesto anterior como cuando los motivos son de incumplimiento por parte del contratista, no se acredita o no constan los informes jurídicos de control interno o del Consejo de Estado previos y preceptivos al acuerdo resolutivo. (Estas circunstancias se han producido en los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Salamanca, Avilés, Mérida y Logroño).

En los Ayuntamientos de Avilés y Mérida, en el cumplimiento de los acuerdos resolutivos no se ha sido riguroso en la incautación de la fianza, en la determinación de los daños y perjuicios y en la liquidación provisional y definitiva de las obras realizadas que permita definir el objeto del contrato de sustitución, en los Ayuntamientos de Aviles y Mérida.

Por último, en el Ayuntamiento de Logroño, la autorización de cesión a terceros de los derechos dimanantes del contrato de obras se realizó con incumplimiento de la normativa de Régimen Local, al no haber ejecutado el cedente ni siquiera el 10 por 100 del presupuesto de contrata.

II.3.2.2.- Contratos para la prestación de Servicios Locales.

En el ejercicio de 1990 se ha comunicado al Tribunal la formalización de 57 contratos de esta modalidad, con un importe global de 30.456 millones de pesetas, de los que se han examinado 20, por un total de 4.592 millones de pesetas.

CUADRO 3 CONTRATOS DE SERVICIOS 1990 (En millones de pesetas)

CRITERIOS		Inferior a 25		Entre 25 y 50		Entre 50 y 100		Superior a 100		TOTALES	
		Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
CONCURSO	Notificados(*)	0	0	5	188	5	341	23	29 063	33	29 592
	Examinados	0	0	1	114	2	117	10	4 286	15	4 517
C DIRECTA	Notificados(*)	12	62	8	284	3	188	1	330	24	864
	Examinados	1	7	2	68	0	0	0	0	5	75
TOTALES	Notificados(*)	12	62	13	472	8	529	24	29 393	57	30 456
	Examinados	1	7	3	182	2	117	10	4 286	20	4 592

(*) Contratos que se han notificado al Tribunal en virtud de lo establecido en el art. 39 de la Ley de Funcionamiento

Del examen realizado de los expedientes contractuales, se señala que:

- Por su finalidad, los servicios públicos locales se concretan a aquellos cuyos receptores o usuarios son los vecinos, siendo el objeto la gestión de la red del agua, la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria, la construcción y explotación de estacionamientos subterráneos de vehículos, la explotación de los mataderos, etc..

- Por la forma de gestión de los servicios locales, el número de los expedientes contractuales es limitado como consecuencia de su personificación en entidades de derecho público o en Sociedades de derecho privado, cuyo capital pertenece en su totalidad a la Corporación Local e indirectamente por el plazo de vigencia de la concesión administrativa.

- Por la forma de selección de la empresa gestora del servicio, el procedimiento es normalmente el concurso público.

- Por la contraprestación del servicio, el gestor percibe una retribución, tendiéndose a la eliminación de la tasa o del precio a percibir del usuario, que, en su caso, gestiona directamente la Corporación.

Las anomalías singulares observadas se exponen a continuación, referidas a los sujetos de la relación contractual, a su consentimiento mediante la formulación y la aceptación de la oferta, a la propia prestación del servicio y de sus variaciones, así como, en su caso, a la terminación. Las citadas anomalías se refieren a los contratos relacionados en el Anexo II.3-3.

A) Respecto a los sujetos de la relacion contractual.

Los órganos locales, titulares del servicio, no han exigido con rigurosidad a la empresa concesionaria la acreditación de su personalidad o la de su representante con poder bastante, de su capacidad y compatibilidad para contratar con la Administración pública, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, ni de la constitución de la fianza provisional establecida en el pliego. Se han observado estas anomalías en los contratos examinados de los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Ciudad Rodrigo y Palencia.

B) Respecto a la determinacion de la oferta.

El objeto concesional se define deficientemente, sea por la falta de constancia o de existencia del anteproyecto de explotación y del estudio económico-administrativo, sea por la sustitución de los mismos por un pliego que no suple a los documentos anteriores. Estas circunstancias se han observado en la Diputación de Valladolid y en los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Albacete, Cáceres, Ciudad Rodrigo, Palencia y Puertollano.

Las anomalías relativas al contenido intrínseco del clausulado del pliego son principalmente la falta de referencia a la normativa especifica del servicio, a las ordenanzas o reglamentos reguladores de las relaciones de la empresa con los usuarios; la indeterminación del plazo de vigencia de la concesión, por no estarlo el del número de sus prórrogas; la exigencia de gastos por dirección e inspección, la limitación de la concurrencia por la exigencia improcedente de una inexistente clasificación empresarial y la falta de concreción de los criterios selectivos para la adjudicación del contrato mediante concurso, como ha ocurrido en los Ayuntamientos de Cáceres, Ciudad Rodrigo y Puertollano.

En los pliegos de cláusulas, determinativos de los derechos y obligaciones de las partes, las irregularidades se refieren a su propia existencia, identificación o autenticidad, a su examen jurídico y control interno por la Secretaría y por la Intervención y a la exposición a efectos de reclamaciones y su resultado. Así se ha observado en el Ayuntamiento de Palencia.

C) Selección, adjudicación y formalización del contrato.

En el conocimiento de la oferta se han detectado irregularidades relativas a la falta de motivación de la tramitación urgente del expediente y de la selección directa del concesionario, a realizar ésta sin la previa consulta a empresas capacitadas y a la deficiente publicidad del concurso por no insertarse el anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Estas anomalías se dan en el Ayuntamiento de Madrid.

En el examen de la documentación presentada por los empresarios que acudieron a los procedimientos selectivos, no se ha tenido el cuidado exigible al realizarse su apertura con antelación a la finalización del plazo de presentación de las plicas, no se deja constancia de su examen mediante acta o no se unen las proposiciones; además, se rechaza una de las empresas por no aportar la clasificación empresarial, no prevista para los servicios públicos en la normativa vigente. (Estas nomalías se observan en un contrato del Ayuntamiento de Cáceres.

En los informes sobre las proposiciones de las empresas y en los acuerdos de adjudicación de las concesiones de los servicios públicos, se han observado anomalías relativas a la inexistencia de los dictámenes técnicos, la falta de ponderación de las propuestas con los criterios preestablecidos en los pliegos de condiciones, a la estimación, como fundamento para la adjudicación, de mejoras o criterios no previstos en el pliego (entre ellos, la condonación de los intereses devengados por la demora en los pagos periódicos de anterior y extinguida concesión) y a la adjudicación sin motivación suficiente, separándose de las propuestas y de los dictamenes técnicos. Asimismo, en algunos acuerdos de adjudicación no se determina la cuantía económica anual del servicio concedido o se realiza la de las obras a ejecutar para su establecimiento, pero no la de la explotación de la actividad y, en otro supuesto, se realiza por precio superior al previsto en el pliego. Se producen estas circunstancias en los Ayuntamientos de Madrid, Palencia, Puertollano y Oviedo.

En los trámites de notificación del acuerdo, de la fianza y de los gastos de formalización y de publicidad, además de las deficiencias procedimentales, tales como retrasos y demoras, ocurre que la fianza se constituye con antelación al acuerdo de adjudicación o con posterioridad y transcurrido el plazo de vigencia del contrato o que no llegue a formalizarse la concesión. (Así ocurre en la Diputación de Valladolid y en los Ayuntamientos de Albacete y Arganda del Rey).

D) Respecto a la prestacion de los servicios.

En el cumplimiento de las prestaciones por los concesionarios se han detectado deficiencias en el cumplimiento de los plazos y en sus prórrogas, así como en el control y en la justificación de las prestaciones, al no constar expresamente la conformidad de los encargados y responsables de las mismas. Tales supuestos se han producido en la Diputación de Valladolid y en el Ayuntamiento de Oviedo.

En relación con las contraprestaciones a recibir por los concesionarios (generalmente, cánon o subvención en lugar de tarifa, tasa o precio) se han observado retrasos en sus abonos susceptibles de generar intereses por demora, llegándose en un caso determinado al cobro directo a los usuarios, sin que mediara acuerdo de autorización. (Así se ha observado en la Diputación de Valladolid, en el Ayuntamiento de Oviedo y en el Ayuntamiento de Palencia).

En el anexo II.3-3 se señalan aquellos expedientes en los que la fiscalización se ha visto limitada por no haberse facilitado los justificantes correspondientes a las prestaciones de los servicios y a los abonos de los mismos al concesionario. (Así ha ocurrido en los Ayuntamientos de Madrid, Aguilas y Eivissa).

E) Respecto a variaciones concesionales.

Las irregularidades observadas en los expedientes examinados hacen referencia:

- Al objeto concesional, por indeterminación del incremento de unidades del servicio o por no ser resultado de un estudio comparativo de explotación y económico-financiero, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Torrelavega.

- Al plazo de vigencia del contrato, al admitirse la prórroga del ya extinguido.

- Al mantenimiento del equilibrio financiero periódico de la concesión, sin que sea resultado de la aplicación de formulas o estudios motivados de dicha índole. Así resulta del examen de los contratos de Cáceres y de Eivissa.

- A los procedimientos, al no constar los previos y preceptivos informes de la Secretaría y de control interno de la Intervención Corporativa, ni los propios acuerdos de autorización y su formalización documental. (Se han observado estas anomalías en los Ayuntamientos de Oviedo y Palencia).

- A las variaciones introducidas en el expediente inicial en el momento de la adjudicación, y en el documento de su formalización. Tal ocurre en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

F) Respecto a la terminación de la concesión.

Los amplios plazos de vigencia de estos contratos no permiten el análisis de su conclusión y efectos, sin embargo se señala que:

- Los órganos de contratación han dado aplicación a las cláusulas sancionadoras cuando el incumplimiento de las prestaciones así lo ha requerido.

- La no ejecución de las obras concesionales ha dado lugar a la suspensión definitiva, sin acreditarse la tramitación de la resolución contractual. (En un contrato dle Ayuntamiento de Arganda del Rey).

II.3.2.3.- Contratos de Suministros.

El análisis realizado se fundamenta en 26 expedientes tramitados por los órganos locales de contratación, con un importe global de 1.983 millones de pesetas. Las Corporaciones notificaron la formalización de 62 contratos de esta modalidad, con un importe total de 3.088 millones de pesetas.

CUADRO 4. CONTRATOS DE SUMINISTROS -1990. (En millones de pesetas)

CRITERIOS		Inferior a 25		Entre 25 y 50		Entre 50 y 100		Superior a 100		TOTALES	
		Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
CONCURSO	Notificados(*)	7	18	23	753	11	703	3	895	44	2.369
	Examinados	1	18	11	370	4	267	3	895	19	1.550
C. DIRECTA	Notificados(*)	6	80	7	248	4	237	1	154	18	719
	Examinados	1	15	2	79	3	185	1	154	7	433
TOTALES	Notificados(*)	13	98	30	1.001	15	940	4	1.049	62	3.088
	Examinados	2	33	13	449	7	452	4	1.049	26	1.983

(*) Contratos que se han notificado al Tribunal en virtud de lo establecido en el art. 39 de la Ley de Funcionamiento.

Los contratos citados tienen como finalidad el aprovisionamiento de los bienes materiales precisos para el cumplimiento de las competencias atribuidas a las Corporaciones Locales, siendo su objeto: la adquisición de maquinaria, utensilios, vehículos, equipos técnicos, de informática y fotocomposición, materiales de la construcción y de vías y obras, combustibles, vestuarios y víveres.

Los proveedores han sido seleccionados mediante la forma ordinaria del concurso público y por contratación directa, conforme con los arts. 118 y siguientes del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril. En algunos de estos últimos supuestos, en los que la designación de la empresa suministradora ha sido directa, dada la tramitación seguida, las adquisiciones se han realizado como si de "suministradores menores" se tratara, aún cuando la contratación superara el límite cuantitativo establecido (art. 86 de la Ley de Contratos del Estado). Así se ha observado en la Diputación de Teruel y en el Ayuntamiento de Calviá.

Las anomalías detectadas se señalan en el mismo orden seguido para los contratos ya examinados y en el anexo II.3-4 se concreta a qué contratos se refieren.

A) Los sujetos de la relacion contractual.

Las irregularidades observadas en relación con este apartado no difieren de las señaladas en el examen de los contratos de obras y servicios, reafirmándose que los órganos y las mesas de contratación no han exigido o no han dejado constancia en el expediente de la personalidad de las empresas suministradoras y de la de sus representantes con poder bastante, así como de su compatibilidad y capacidad para contratar con las Administraciones Locales. En determinados supuestos no se ha justificado la constitución de las fianzas provisionales determinadas en los pliegos. Anomalías de esta naturaleza se han observado en las Diputaciones de Badajoz y de Valladolid.

B) La determinacion de la oferta.

Las anomalías observadas en la determinación de los bienes objeto de los contratos de suministro se refieren a las deficiencias en

las propuestas formuladas por los servicios competentes, en algunos casos por no concretar las características y las especificaciones técnicas, los presupuestos resultantes de los precios por unidades o el límite máximo del gasto. En otros, por el contrario, por hacerlo de tal manera, que, definiendo los productos y su procedencia, eliminan algunas empresas y favorecen a otras competidoras. Así ocurre en las Diputaciones de Badajoz y Valladolid y en los Ayuntamientos de Albacete y Calviá.

En el examen de estos expedientes contractuales se ha observado la utilización de pliegos de condiciones tipo que no reúnen las condiciones de analogía, la falta de su autorización por el organo de contratación local y la falta de constancia de los citados pliegos en el expediente. Así ocurre en la Diputación de Badajoz.

En los aspectos intrínsecos del clausulado de los pliegos de condiciones se observan deficiencias en la determinación de los requisitos de la capacidad técnica, económica y financiera acreditativas de la aptitud de las empresas suministradoras y de los criterios selectivos que han de tener en cuenta tanto los licitadores como posteriormente los órganos de contratación, en el acuerdo de adjudicación. Otras anomalías usuales en los clausulados hacen referencia a la indeterminación de la posibilidad de dividir el objeto en lotes, suertes o partidas y de los plazos general y parciales para las entregas y recepciones. Así se ha observado en las Diputaciones de Badajoz y Valladolid y en el Ayuntamiento de Calviá.

Finalmente, los órganos locales no han sido muy explícitos sobre la aceptación o no, en orden a la conformación de sus decisiones, del contenido de los informes jurídicos y los controles internos que, sobre los pliegos, expediente y ordenación del gasto deben emitir la Secretaría y la Intervención y tampoco lo han sido en relación con la publicidad de dichos documentos, para que las empresas interesadas pudieran, en su caso, formular las reclamaciones procedentes. Así ocurre en la Diputación de Zaragoza.

C) Selección, adjudicación y formalización del contrato.

En las convocatorias realizadas por los órganos de contratación local mediante licitación por concurso público, se han observado en algunos casos deficiencias en la inserción de los anuncios en los medios oficiales de comunicación (Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a pesar de ser la cuantía del suministro superior al umbral establecido en ECUS). Esta circunstancia se ha dado en la Diputación de Badajoz.

Asimismo, el contenido de algunos anuncios no reseñan expresamente los bienes a adquirir, la fecha de remisión al D.O.C.E., las garantías a constituir, la previa existencia de consignación y la posibilidad de ofertar por lotes o los plazos de entrega.

En algunos casos, cuando la selección del proveedor ha sido directa, el órgano de contratación no la ha justificado en alguno de los supuestos admitidos en la normativa aplicable, no ha realizado la prospección adecuada entre las empresas para la fijación del precio justo, o de todo ello no ha dejado constancia en el expediente. Así ocurre en la Diputación de Zaragoza.

Los acuerdos de adjudicación del suministro, no se fundamentan en los informes-propuestas formulados por los técnicos, o no se motivan en la adecuada ponderación de los criterios preestablecidos en los pliegos, introduciendo otros no previstos anteriormente. Se han observado estas anomalías en la Diputación de Zamora y en los Ayuntamientos de Calviá, Logroño y Oviedo.

Se observan irregularidades al adjudicar el objeto por lotes sin estar previsto en el pliego, al ser su precio superior al de la propuesta, al no determinar las unidades a suministrar, al aprobar en el mismo acuerdo el pliego de condiciones y la adjudicación o al adquirir los bienes como si se tratara de suministros menores. Así se observa en la Diputación de Zaragoza, y en los Ayuntamientos de Burgos y Madrid.

Otras anomalías son la falta de constancia de las comunicaciones de los acuerdos a los proveedores, adjudicatarios o no, con la consiguiente falta de transparencia de las actuaciones resolutivas y su formalización con retraso o no constancia de la misma, como ocurre en la Diputación de Valladolid.

D) La entrega y abono de los suministros.

En la justificación de la ejecución de los contratos, mediante la expedición de las facturas correspondientes, se ha observado que en algunos falta la conformidad con las entregas de los servicios receptores, las facturas son de fecha anterior a los acuerdos de adjudicación o los precios unitarios son distintos de los concertados. Así ocurre en la Diputación de Teruel.

Los plazos de entrega de los bienes o de abono de las facturas se han incumplido en varios casos y en algunos de los pagos no se concretan los bienes suministrados. Se observan estas irregularidades en la Diputación de Teruel y en el Ayuntamiento de Madrid.

No se han aportado los documentos justificativos de determinados suministros, tanto en relación a su entrega como a su abono o pago efectivo. Ocurren estos hechos en la Diputación de Valladolid y en el Ayuntamiento de Palencia.

E) Modificaciones de los suministros.

En el Ayuntamiento de Oviedo un contrato de suministro se ha modificado mediante la prórroga de su vigencia, habiéndose tomado el acuerdo una vez transcurrido el plazo de vigencia originario.

F) Terminacion de los contratos.

La falta de ejecución, o el incumplimiento de las obligaciones en algún supuesto, no ha generado el inicio del expediente de resolución del contrato y en los que éste se ha tramitado no se acredita que haya sido informado por la Secretaría o la Intervención de la Corporación. Así se ha observado en la Diputación de León.

II.3.2.4.- Otros Contratos.

Se incluyen en este apartado los resultados del examen de los expedientes contractuales tramitados por las Entidades Locales, cuyo objeto es la contratación de operaciones de crédito y tesorería, así como de aquellos otros que tienen por finalidad la asistencia técnica y la prestación de determinados servicios a las Administraciones Locales, por parte de empresas consultoras.

El número de contratos de esta modalidad examinados ha sido de 35 y su importe global de 4.991 millones de pesetas, habiéndose notificado al Tribunal la formalización de 51 expedientes contractuales, por un importe de 6.347 millones de pesetas.

Al analizar los contratos relativos a operaciones de crédito y de tesorería, se ha advertido que los que han sido notificados a este Tribunal, por parte de las Corporaciones Locales, alcanzaban la cifra de 1.000 millones de pesetas, mientras que el valor agregado de los derechos liquidados en el capítulo 9 (Variación de pasivos financieros) de todas las Corporaciones que han sido objeto de examen y comprobación de sus cuentas se eleva a 278.209 millones de pesetas. Esta circunstancia se interpreta como una importante omisión en la notificación al Tribunal de esta modalidad de contratos y, por ello, en los ejercicios siguientes al fiscalizado se procederá a requerir, con carácter general, el cumplimiento de este extremo.

CUADRO 5. OTROS CONTRATOS - 1990. (En millones de pesetas)

CRITERIOS		Inferior a 25		Entre 25 y 50		Entre 50 y 100		Superior a 100		TOTALES	
		Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
SUBASTA	Notificados(*)	1	4	1	42	3	215	2	679	7	940
	Examinados	1	4	1	42	3	215	2	679	7	940
CONCURSO	Notificados(*)	0	0	10	317	5	387	11	2.243	26	2.947
	Examinados	0	0	6	203	3	253	5	1.268	14	1.724
C. DIRECTA	Notificados(*)	0	0	10	342	2	104	6	2.014	18	2.460
	Examinados	0	0	6	209	2	104	6	2.014	14	2.327
TOTALES	Notificados(*)	1	4	21	701	10	706	19	4.936	51	6.347
	Examinados	1	4	13	454	8	572	13	3.961	35	4.991

(*) Contratos que se han notificado al Tribunal en virtud de lo establecido en el art. 39 de la Ley de Funcionamiento.

El análisis de estos expedientes se ha realizado atendiendo a su finalidad y mediante el contraste de su tramitación con la prevista en la normativa especial que le es aplicable y con la de contratación y régimen local. La especialidad referida esta recogida, fundamentalmente, en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como en el Decreto 1005/1974, de 4 de abril, sobre asistencia técnica y de servicios de empresas consultoras.

Las anomalías que se exponen se refieren a los contratos relacionados en el anexo II.3-5.

En los 10 expedientes de compra-venta examinados, las enajenaciones se han realizado por subasta pública y las adquisiciones han sido onerosas y concertadas directamente o por concurso, siendo de señalar las irregularidades siguientes:

- Infracción de las normas de aplicación supletoria (falta de acreditación de la personalidad del adjudicatario y de su capacidad y compatibilidad para contratar con la Administración, irregular constitución de la mesa de contratación y no constancia de la constitución de la fianza. Así ocurre en los contratos examinados de los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Burgos y Cáceres.

- Irregularidades específicas de este tipo de contratos, referidas a la deficiente descripción y valoración de los bienes (delimitación cartográfica, calificación urbanística, cabida, derechos reales afectantes, etc.), así como a retrasos o falta de formalización por escritura pública o a la introducción en ésta de cláusulas no autorizadas en los acuerdos correspondientes (aplazamiento de pago, pena civil o pacto lex comisoria). Se han observado este tipo de anomalías en los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Cáceres y Torrelavega.

- El incumplimiento de las obligaciones recíprocas en ocasiones no ha generado la tramitación de expediente de resolución con la exigencia de responsabilidades, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Los expedientes examinados para la concertación de créditos, unos han tenido como finalidad la financiación de planes de obras de inversión, y otros, la de atender las necesidades propias de tesorería o los anticipos a cuenta de la recaudación municipal gestionada por las Diputaciones provinciales. Las deficiencias a

señalar en los 6 contratos analizados, corresponden a la Diputación Provincial de Valladolid y al Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, y son las siguientes:

- La normativa especial sobre crédito local se ha cumplido generalmente, salvo en el control interno, que no se acredita en expediente o no abarca a todos los aspectos de esta materia (arts. 53 y 54 de la Ley 39/1988).

- En la formalización se ha modificado la cuantía de los préstamos prevista inicialmente y la definición de las condiciones no se determina en el pliego redactado por el órgano de contratación local, sino que se obtiene de la oferta de los productos financieros de las propias entidades.

- La selección de la entidad bancaria -siempre contratación directa- no es resultado de una prospección del mercado de capitales. (Así ha ocurrido en la Diputación Provincial de Valladolid).

- La formalización de los contratos no consta autorizada por los fedatarios de la Corporación Local, ni acreditada la personalidad de la Entidad financiera o la de sus representantes.

En el examen de los 19 expedientes contractuales restantes, tramitados para la obtención de estudios, informes, dictámenes, proyectos o para la prestación de actividades o servicios a las Administraciones Locales, se han observado anomalías sobre:

- El incumplimiento de la normativa aplicable a estos contratos administrativos especiales, constituida principalmente por el Decreto 1005/1974, de 4 de abril, al no constar calificados, exigida y acreditada la clasificación empresarial procedente, ni justificada su necesidad ante la insuficiencia, inadecuación o inconveniencia de ampliar de los medios personales o materiales de la propia Entidad Local. Se han observado estas anomalías en las Diputaciones de León y Salamanca y en los Ayuntamientos de Avila y Alcalá de Henares.

- Deficiencias en la determinación del objeto, sus características y cuantificación máxima o indicativa en los pliegos, al incluir cláusulas contra lege (aplazamiento de los pagos, vigencia contractual indefinida), en los procedimientos selectivos (falta de ponderación de los criterios preestablecidos en los concursos o de la motivación de la urgencia en la tramitación o en la concertación directa), en los acuerdos de adjudicación (predeterminación de la empresa, propuesta de cuantía superior al tipo o de fecha anterior a la aprobación del pliego, y adoptarse en el mismo acuerdo de autorización del pliego y su adjudicación) y en la constitución de la fianza definitiva (fecha anterior a la adjudicación). Se han producido estas irregularidades en las Diputaciones de Huesca y León y en los Ayuntamientos de Oviedo, Avila, Madrid y Cartagena.

- La ejecución de los contratos, por incumplimiento de obligaciones contraídas (formalización de póliza de seguro de responsabilidad civil) y de los plazos pactados (prestaciones anteriores a la adjudicación o posteriores a la vigencia contractual) o por modificaciones en las prestaciones (sin fundamentación en estudios o análisis). Se han observado estos hechos en los Ayuntamientos de Madrid, Oviedo y Cartagena.

- La justificación de las prestaciones (facturas anteriores a la adjudicación o no recibidas de conformidad por los Servicios Locales), de los abonos a los adjudicatarios (retrasos o pendientes) y a la recepción o liquidación de los objetos (Diputación de León).

Fondo de Compensación Interterritorial

ÍNDICE

I. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DE 1990

II. FCI GESTIONADO POR EL ESTADO

III. FCI GESTIONADO POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

I. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DE 1990

La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial -en adelante FCI- es una norma fundamental dentro del marco financiero de las Comunidades Autónomas, en la medida que en ella se recogen y articulan los principios constitucionales y normas básicas que, respecto al mencionado Fondo, se contemplan en el art. 158 de la Constitución y en el art. 16 de la Ley 8/80, de Financiación de dichas Comunidades.

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, que ha venido regulando el comportamiento del FCI hasta 1990, supuso un gran esfuerzo legislativo por cuanto en el momento de su promulgación el proceso autonómico se encontraba en sus inicios y no estaba consolidado, aún, el conjunto de mecanismos financieros previstos por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Asimismo, la citada Ley del FCI siguió regulando el FCI durante la vigencia del denominado Sistema de Financiación definitivo, cuyo ámbito ha cubierto el período comprendido entre el primero de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1991, de conformidad con el acuerdo adoptado al efecto en el seno del Consejo de Política fiscal y Financiera, de noviembre de 1986.

Dentro del período de vigencia de la Ley 7/1984 se produce, además, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, hecho relevante que propugnó la conveniencia de que el Estado adoptase una política regional coherente y armónica con la comunitaria, lo que exigió la puesta en práctica de nuevos criterios de selectividad acordes con el desarrollo regional solidario y redistributivo que persiguen, tanto el FCI como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), instrumentos financieros que tienen idéntico objeto y, por lo tanto, se complementan.

Estos hechos, entre otros, motivaron la revisión de la Ley 7/84, elaborándose un nuevo proyecto de Ley de FCI en el Seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En consecuencia, el 26 de diciembre de 1990 se promulga la Ley 29/1990, del FCI, que derogó la primitiva Ley 7/1984, retrotrayendo sus efectos al 1 de enero de 1990, en la medida que el comportamiento del Fondo había venido regulándose en la práctica a través del acuerdo del citado Consejo, de 21 de febrero de 1990, que incluía el mencionado proyecto de Ley, el cual, casi en todos sus puntos, fue recogido por la nueva Ley del Fondo.

Desde el punto de vista normativo la Ley 29/1990 contempla al FCI como exclusivo instrumento de la solidaridad destinando sus recursos al desarrollo de los territorios más desfavorecidos, en la línea del mandato constitucional que desarrolló la LOFCA.

Desde esta óptica, el FCI se desvincula definitivamente de la financiación de las inversiones aparejadas a los servicios transferidos por el Estado a las Comunidades Autónomas, y se fundamenta una de las modificaciones más importantes dentro de las aportadas por la nueva Ley, consistente en designar como únicos beneficiarios del FCI a dichas Comunidades, y dentro de ellas, a aquellas que están incluidas en el objetivo primero de la Comunidad Económica Europea.

Consecuentemente, además de no figurar el Estado como destinatario del FCI a partir de 1990, para el bienio 1990-91 los recursos del Fondo se distribuyen entre nueve Comunidades tan sólo, siendo estas las siguientes: ANDALUCÍA, ASTURIAS, CANARIAS, CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, GALICIA, MURCIA y la COMUNIDAD VALENCIANA.

De conformidad con lo expuesto, la sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, tan sólo consigna la dotación total del FCI para las citadas Comunidades Autónomas por importe de 120.044 millones de pesetas.

II.- FCI GESTIONADO POR EL ESTADO

A).- DOTACIONES PRESUPUESTARIAS GESTIONADAS POR EL ESTADO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

No obstante lo evidenciado anteriormente, algunos centros del Estado contaban a finales de 1989 con remanentes del FCI de ejercicios anteriores, que se incorporaron al de 1990, no en su totalidad, para continuar la ejecución de los proyectos ya iniciados. Para la administración de estos remanentes continúa en vigor la primitiva Ley 7/1984, de 31 de marzo, según lo dispuesto en la Diposición Transitoria primera de la nueva Ley del FCI.

Los citados remanentes incorporados al presupuesto de 1990 y gestionados por el Estado ascendieron a 2002 millones de pesetas, de los cuales 986 millones correspondieron a la Administración General, a través de las Direcciones Generales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (936 millones) y Ministerio de Justicia (50 millones), y el resto, por importe de 1.016 millones de pesetas, a la Administración Institucional, distribuidos entre la Confederación Hidrográfica del Norte de España (2 millones) y la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar (1.014 millones de pesetas).

B).- OBJETIVOS

Los objetivos de la fiscalización de estos remanentes de créditos incorporados al ejercicio de 1990, han sido los siguientes:

- Verificar la regularidad legal y contable de las operaciones realizadas con cargo al FCI.
- Comprobar que la aplicación de los remanentes del FCI se ha efectuado de acuerdo con los fines que le son propios.
- Verificar la utilización de los remanentes del FCI en los proyectos definidos presupuestariamente, con especial atención al reparto territorial.
- Analizar el grado de ejecución de los proyectos.

C).- LIMITACIONES

Respecto al alcance de la fiscalización efectuada en este área de competencia, ésta se ha cubierto sin limitaciones.

D).- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

El resultado de las comprobaciones efectuadas sobre la documentación que justifica la gestión del FCI efectuada por el Estado durante el ejercicio de 1990, se presenta, en la misma línea que en ejercicios anteriores, clasificado en dos grupos: Administración General del Estado y Administración Institucional, comprendiendo esta última los Organismos Autónomos de carácter administrativo y de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.

Asimismo, las particularidades correspondientes a cada Centro Gestor se detallan en los respectivos apartados de este epígrafe.

II.1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

II.1.1.- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

Los remanentes del FCI que figuraban a 31 de diciembre de 1989 a disposición de este Departamento ascendían a un importe total de 1.280 millones de pesetas, distribuidos entre los distintos proyectos de inversión gestionados a través de sus Direcciones Generales de Obras Hidráulicas, Carreteras, Puertos y Costas, y Vivienda y Arquitectura.

Dichos remanentes estaban vinculados a distintos Fondos correspondientes, por un lado al FCI de 1989 (el 90%) y el resto a FCI de 1988 y anteriores. Tal y como se ha evidenciado, no se ha procedido a incorporar al ejercicio de 1990 la totalidad de los remanentes de crédito de ejercicios anteriores, conforme preceptuaba al efecto el art. 79 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Por centros gestores de este Departamento, se ponen de manifiesto los siguientes resultados:

- Dirección General de Obras Hidráulicas.

Los remanentes del FCI de 1989 que figuraban a 31 de diciembre de 1989 ascendían a 797 millones de pesetas, de los cuales se incorporaron al presupuesto de 1990 541 millones de pesetas.

Los remanentes no incorporados afectaron a varios proyectos, siendo los más significativos por su relevancia económica "Inversiones en infraestructura Urbana" en Ceuta, "Embalse de Riaño" y "Riegos del Canal M.I. del Porma" en Castilla-León, e "Inversiones para Infraestructura Urbana" en Guipúzcoa, con unos remanentes no incorporados de 66, 55, 45 y 21 millones de pesetas respectivamente.

La Dirección General de Obras Hidráulicas manifestó que la razón de la no incorporación de estos créditos fue que a 31 de diciembre de 1989 no se encontraban en fase de compromiso. En todo caso, la no incorporación de los remanentes supone el incumplimiento de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que obliga expresamente a su incorporación al presupuesto de 1990. Aún en el supuesto de que tales proyectos resultasen técnicamente concluidos, los excedentes de crédito resultantes podrían haber sido empleados en la financiación de otros proyectos en la misma Comunidad Autónoma mediante la fórmula establecida en la propia Ley reguladora del F.C.I.

Los 541 millones de pesetas del F.C.I. de 1989 incorporados al ejercicio 1990 corresponden a doce proyectos de inversión en distintas Comunidades Autónomas, de los cuales sólo en tres los créditos han sido realizados en su totalidad o en porcentajes muy próximos al 100%.

En los proyectos "Embalse de Riaño" y "Canal de Enlace Esla-Cea (Valderaduey)" en Castilla-León e "Inversiones para Infraestructura Urbana" en Ceuta, con unos remanentes incorporados de 25, 38 y 28 millones de pesetas respectivamente, se han reconocido obligaciones por 17, 32 y 26 millones de pesetas.

En los seis proyectos de inversión restantes, el reconocimiento de obligaciones ha sido nulo o por importes casi insignificantes, de los cuales caben destacar por su relevancia económica el proyecto "Riegos del Tramo 4º. Canal de Monegros" en Aragón, con unos remanentes incorporados de 408 millones de pesetas.

La obra "Acondicionamiento del Revestimiento del Túnel de la Sierra de Alcubierre", incluída en el proyecto de inversión anteriormente citado, se inició en diciembre de 1983, con un plazo previsto de realización de tres años y fue declarada en suspensión temporal el 5 de agosto de 1986 por la Dirección General de Obras Hidráulicas. El motivo de esta suspensión fue la necesidad de realizar unos estudios y pruebas sobre la obra ya ejecutada como consecuencia de los problemas planteados en el fraguado del hormigón derivados de la composición de los terrenos donde se asentaba la obra. A la vista de tal situación la empresa adjudicataria de la obra solicitó el 20 de septiembre de 1988 la resolución del contrato, sobre la que el Consejo de Estado dictaminó favorablemente el 24 de enero de 1990. La Dirección General no ha solicitado al Comité de Inversiones Públicas la sustitución de este proyecto por otro en la misma Comunidad Autónoma, procedimiento previsto en la Ley del FCI.

En la obra "Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras para el control de vigilancia de las obras de terminación y cierre de la Presa de Riaño (León)", incluido en el proyecto de inversión "Embalse de Riaño", se han reconocido obligaciones por importe de 3 millones de pesetas correspondientes a certificaciones de obras aprobadas en 1989.

La Dirección General de Obras Hidráulicas no contaba a 31 de diciembre de 1989 con ningún otro remanente de los FCI de 1988 y años anteriores. Tal circunstancia ha sido comprobada por el Tribunal de Cuentas a través de los expedientes de modificación de crédito.

- Dirección General de Carreteras

Los remanentes del FCI que figuraban a 31 de diciembre de 1989 ascendían a 356 millones de pesetas, de los cuales 325 millones de pesetas fueron incorporados al presupuesto de 1990. La no incorporación de los 31 millones de pesetas restantes supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Los 325 millones de pesetas incorporados corresponden a tres proyectos de inversión. En dos de ellos se reconocieron obligaciones por la totalidad de los remanentes. En el tercero "Actuaciones en Melilla", con un remanente incorporado de 143 millones de pesetas, no se reconocieron obligaciones.

La Dirección General de Carreteras también contaba además con unos remanentes del FCI de 1988, 1987 y años anteriores por un importe total de 57 millones de pesetas que no fueron incorporados al ejercicio de 1990, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 79 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Los datos expuestos sobre remanentes incorporados han sido certificados por el Servicio de Contabilidad del Ministerio a petición de este Tribunal, dado que los mismos no han podido ser obtenidos de los expedientes de incorporaciones de crédito al no precisar éstos qué parte de los créditos incorporados corresponde al FCI.

- Dirección General de Puertos y Costas

La Dirección General de Puertos y Costas sólo contaba a 31 de diciembre de 1989 con unos remanentes del FCI de 1988 correspondientes al proyecto "Mejora acceso playas en Ceuta" por un importe de 2 millones de pesetas, que fueron incorporados al ejercicio de 1990. Las obligaciones reconocidas alcanzaron la totalidad de los créditos incorporados. Cabe señalar que las certificaciones de obras correspondientes fueron aprobadas en el ejercicio de 1989, por lo que deberían haber sido imputadas a este ejercicio y no al de 1990.

- Dirección General para la Vivienda y Arquitectura

La Dirección General para la Vivienda y Arquitectura sólo contaba a 31 de diciembre de 1989 con remanentes del FCI de 1988 y anteriores, que incorporó al ejercicio 1990 en su totalidad.

Los remanentes del FCI de 1988 ascendían a 8 millones de pesetas correspondientes al proyecto denominado "620 Viviendas en Ceuta". No obstante, los créditos se emplearon en financiar parcialmente el proyecto "Construcción de 31 viviendas en c/ Tte. Arrabal, Mendoza y Somoa. Ceuta", cuyo código de inversión difiere del citado anteriormente. Esta sustitución de proyectos no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, incumpliendo de esta forma lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley del FCI.

Los remanentes del FCI de 1987 y años anteriores ascendían a 60 millones de pesetas correspondientes a tres proyectos de inversiones en Melilla. Los remanentes se incorporaron en su totalidad y las obligaciones reconocidas ascendieron a 44 millones.

II.1.2.- MINISTERIO DE JUSTICIA

Este Departamento contaba con un remanente de crédito perteneciente al FCI de 1989 por importe total de 50 millones de pesetas, cuya gestión correspondía a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y estaba vinculado a un proyecto de inversión para la Comunidad Autónoma de Navarra, dentro del programa "Tribunales de Justicia".

El citado Centro Gestor ha incorporado la totalidad del remanente de crédito al ejercicio 1990.

De acuerdo con la liquidación presupuestaria presentada, se pone de manifiesto que durante el ejercicio de 1990 se aplicaron a dicho proyecto 20 millones de pesetas, destinándose el importe restante a la financiación de otro proyecto (nº. 88.13.003.1002) no vinculado al FCI, habiéndose incumplido el art. 7.4 de la Ley 7/1984, del FCI, respecto al trámite establecido para la sustitución de proyectos.

II.2.- ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO

II.2.1.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Estos Organismos disponían de un remanente de crédito a 31 de diciembre de 1989 por importe total de 1.434 millones de pesetas,

distribuidos entre distintos proyectos de inversión vinculados al FCI de 1989 (94%) y al FCI de 1988 el resto, siendo gestionados a través de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, y el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Del examen practicado se evidencia que no se ha procedido a incorporar la totalidad de remanentes de crédito citados, tal y como preceptuaba al efecto al art. 79 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

- Junta de Instalaciones, Construcciones y Equipo Escolar

El montante de los remanentes de crédito vinculados al FCI incorporados al ejercicio de 1990 por este Organismo ascendió a 1.014 millones de pesetas, importe inferior en 338 millones al realmente existente al 31 de diciembre de 1989.

La diferencia obedece, en su práctica totalidad, según manifestaciones del Organismo, a remanentes de crédito no comprometidos vinculados al F.C.I. de ejercicios anteriores a 1989 que corresponden a programas cuyas competencias estaban asumidas por dos Comunidades Autónomas (Canarias 216 millones y Navarra 122 millones), por lo que no se consideró procedente solicitar de nuevo su incorporación. Este proceder supone el incumplimiento de lo dispuesto en materia del FCI, en cuanto a la obligación de transferir los créditos no comprometidos a las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en servicios que tenían inicialmente afectos proyectos del Fondo a ejecutar por la Administración del Estado.

Como en ejercicios anteriores, parte de los proyectos de inversión afectos al F.C.I. se han cofinanciado con créditos ordinarios del Organismo al resultar insuficientes las dotaciones de crédito del Fondo, lo que dificulta el control de la inversión realizada para los distintos créditos -ordinarios y vinculados al F.C.I.-, problemática resuelta por el Organismo adoptando el criterio de imputación preferencial a los créditos del F.C.I.

La inversión realizada por este Organismo, en término de obligaciones reconocidas, en los distintos programas de gasto distribuidos por Comunidades Autónomas asciende a 652 millones de pesetas y presenta el siguiente detalle: (En millones de pesetas)

CC.AA.	ENSEÑA. PREESC.	EGB	ENSEÑA. MEDIAS	ENSEÑANZ. UNIVERSIT.	ENSEÑAN. ESPECIAL	TOTAL
La Rioja	-	-	-	-	-	-
Madrid	-	1	-	-	13	14
Extremadura	-	77	415	57	-	549
Galicia	-	-	-	-	-	-
Castilla-La Mancha	-	-	-	-	-	-
Murcia	-	55	-	-	-	55
Baleares	-	-	-	-	-	-
Ceuta	-	32	2	-	-	34
Melilla	-	-	-	-	-	-
TOTAL		165	417	57	13	652

Del análisis efectuado se desprende, que un 91,3% corresponde a obras y el 8,7% a equipamiento, evidenciándose que la inversión se ha realizado respetando el destino por Comunidades Autónomas y programas de gastos de los remanentes incorporados en el ejercicio. No obstante, se destacan los siguientes hechos:

El grado de ejecución global de los créditos ha alcanzado un 64,30%, con un incremento de más de 10 puntos porcentuales respecto del ejercicio anterior, aumento que se estima insuficiente al tratarse de créditos procedentes de incorporaciones y por tanto afectados a proyectos ya iniciados. Los niveles de ejecución más deficientes se observan en los programas de gastos 422A "Educación Preescolar" -un 0%-, 422B "E.G.B." -un 40,9%- y 422D "Enseñanzas Universitarias" -un 16,9%- y para las Comunidades Autónomas de Madrid -un 11,5%- y Ceuta -un 12,8%-. Los principales proyectos de inversión afectados por el bajo grado de ejecución se presentan en el siguiente detalle:

C.AUTONOMA	PROYECTO-DENOMINACION	DOTAC.CRED. (millones)	% EJECUCION
A) FCI/1987 PROG.422B CEUTA	Adaptación Centros Públicos E.G.B	261,9	12,2
B) FCI/1988 PROG.422C MADRID	Construcción Puestos E. Medias	10,0	0
C) FCI/1989 PROG.433A MADRID	Construcción Puestos Preescolar	33,3	0
PROG.422E MADRID	Construcción Puestos en Centros Específicos de Educación Especial	77,5	16,9
	TOTAL PROYECTOS FCI SIGNIFICATIVOS CON UN BAJO NIVEL DE EJECUCION	382,7	

Como en el ejercicio anterior, para aquellas inversiones gestionadas en régimen de desconcentración por determinadas Delegaciones provinciales (Murcia, Ceuta y Badajoz), se ha puesto de manifiesto un deficiente soporte documental de las órdenes de pago -falta de fiscalización de certificaciones de obra, falta de recibí, acta de recepción incorrecta- que denota una debilidad del sistema de control interno en los Servicios Centrales del Organismo, ya que, aunque estas inversiones se gestionan de forma descentralizada por las Direcciones Provinciales, debería instrumentarse una técnica de control para la supervisión de la documentación remitida por aquéllas.

Por último, en cuento a otros hechos significativos que afectan a la fiscalización efectuada, procede exponer que en el informe anual correspondiente al ejercicio 1987 se puso de manifiesto la existencia de un libramiento a justificar a favor de la Universidad de Santiago de Compostela, con cargo a créditos del F.C.I. y por importe de 42 millones de pesetas, destinado a satisfacer los intereses de demora derivados de un expediente de expropiación forzosa de terrenos. En relación a la cuantía de estos intereses se interpusieron diversos recursos que quedaron finalmente resueltos por Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de noviembre de 1989.

La aplicación de la citada Sentencia determinó una cuantificación de los intereses de demora cifrada en 2 millones de pesetas, por lo que resulta una cantidad de 40 millones de pesetas a reintegrar por la Universidad de Santiago de Compostela con cargo a los fondos a justificar recibidos.

Ante los reiterados requerimientos que el Organismo ha efectuado a la Universidad, esta ha reintegrado 29 millones de pesetas el 20-5-92 quedando pues pendiente de reintegrar la diferencia de 11 millones de pesetas.

- Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)

El IRYDA contaba a 31 de diciembre de 1989 con remanentes del FCI de 1988, por importe de 82 millones de pesetas, correspondientes a cuatro proyectos de inversión en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Los citados remanentes no fueron incorporados al ejercicio de 1990, continuando con la práctica de ejercicios anteriores. De esta forma se incumple lo dispuesto en el artículo 79, punto 4º, de la Ley 4/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

II.2.2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERO O ANÁLOGO

Los remanentes de crédito a 31 de diciembre de 1989 a disposición de estos Organismos ascendían a 84 millones de pesetas, correspondientes a proyectos de inversión vinculados al FCI de 1989 gestionados por la Confederación Hidrográfica del Norte de España, y por la Junta de Puertos del Estado en Baleares. Como se ha evidenciado en epígrafes anteriores, no se ha procedido a incorporar en su totalidad dichos remanentes, tal y como preceptuaba el art. 79 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

- Confederación Hidrográfica del Norte de España

Este Centro Gestor contaba con unos remanentes del F.C.I. de 1989 por importe de 2 millones de pesetas correspondientes a un proyecto de inversión en el País Vasco, que se incorporaron y realizaron en su totalidad durante el ejercicio 1990.

- **Junta de Puertos del Estado en Baleares**

Los remanentes del FCI de 1989 que figuraban a 31 de diciembre de 1989 ascendían a 30 millones de pesetas correspondientes a un proyecto: "Terminal mixta de pasajeros y mercancías en el Puerto Cala Sabina". Este remanente, consecuencia de un reajuste de anualidades realizado en 1989 para el citado proyecto, no fue incorporado al presupuesto de 1990, incumpliendo de esta forma lo señalado para los proyectos del FCI en el artículo 79 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Por otra parte, con motivo de la integración de varios puertos en la Junta de Puertos del Estado de Baleares en 1989, la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, a quien se le había asignado originariamente el FCI de 1989 por 248 millones de pesetas, sólo transfirió durante 1989 crédito por importe de 196 millones de pesetas. Los 52 millones de pesetas restantes fueron anulados al no transferirse ni incorporarse al ejercicio siguiente, pese a que los dos proyectos de inversión "Terminación muelles comerciales, Puerto de Ibiza" y "Terminal mixta de pasajeros y mercancías en el Puerto de Cala Sabina" seguían ejecutándose en 1990 con créditos ordinarios.

II.3.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

En el anexo FCI-1 de los que acompañan al presente informe se expone la liquidación presupuestaria de los créditos afectados a los distintos Fondos por operaciones realizadas en 1990 por los Centros Gestores analizados. Dichos créditos hacen referencia, exclusivamente, a los remanentes incorporados al FCI de 1990 por los mencionados Centros, que no alcanzan la totalidad de créditos incorporables tal y como preceptuaba el art. 79 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

De haberse observado el citado precepto por la totalidad de los Centros Gestores del FCI en el ejercicio de 1990, los remanentes de crédito que deberían haberse incorporado al FCI de 1990 ascenderían, al menos a 2.848 millones de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

	REMANENTES FCI A 31/12/89 EN DIVERSOS FCIs	REMANENTES INCORPORADOS A FCI 1990	REMANENTES FCI NO APLICADOS A FCI 1990
. Mº.OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO			
- D.G.Obras Hidráulicas	797	541	256
- D.G.de Carreteras	413	325	88
- D.G.Puertos y Costas	2	2	--
- D.G.Vivienda y Arq.	68	68	--
TOTAL	1.280	936	344
. Mº.JUSTICIA			
- D.G.Relaciones Admón. Justicia	50	50	--
TOTAL	50	50	--
. JUNTA INST.CONST. Y EQUIPO ESCOLAR	1.352	1.014	338
TOTAL	1.352	1.014	338
. IRYDA	82	--	82
TOTAL	82	--	82
. CONF.HIDRO.NORTE ESPAÑA	2	2	--
TOTAL	2	2	--
. JUNTA PTOS.ESTADO EN BALEARES	82	--	82
TOTAL	82	--	82
T O T A L ...	2.848	2.002	846

Respecto al análisis del citado anexo FCI-1, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este presenta unos créditos incorporados por importe total de 2.002 millones de pesetas distribuidos casi al 50% entre los Centros Gestores de la Administración General e Institucional del Estado.

El grado de ejecución, globalmente considerado, alcanza un nivel equivalente al 50%, lo que evidencia el retraso que se produce en la ejecución de los proyecto financiados con cargo al FCI. Dicho retraso resulta más apreciable en los centros Gestores dependientes de la Administración General del Estado (36%), que en la Institucional (64%), si atendemos al citado grado de ejecución respectivo.

Asimismo, en el anexo FCI-2 de los que acompañan a este Informe se presentan las obligaciones reconocidas correspondientes a los distintos proyectos financiados con cargo a los créditos incorporados al FCI de 1990, clasificados por sectores de inversión y distribuidos por los distintos Centros Gestores que han realizado ejecución de proyectos durante el ejercicio 1990.

En la medida que a partir de este ejercicio (1990) el Estado no tiene asignado recursos del Fondo para gestionar, el citado anexo carece de otro interés distinto al meramente informativo, por cuanto sólo recoge aquellas obligaciones sectorizadas que corresponden a remanentes de crédito de FCI no consumidos al 31 de diciembre de 1989.

Por último, en los anexos FCI-3 y FCI-4 se complementa la liquidación presupuestaria rendida por la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, detallando dicha liquidación por Comunidades Autónomas afectadas y los programas de gasto correspondientes.

II.4.- OBSERVACIONES GENERALES

Sin perjuicio de las conclusiones obtenidas en la fiscalización efectuada para cada Centro Gestor, que se detallan en sus apartados correspondientes, no obstante, cabe destacar algunas de ellas, puestas de manifiesto de forma reiterada en informes de años anteriores:

a) En ningún centro gestor los remanentes del FCI aparecen contabilizados en conceptos presupuestarios diferenciados. De esta forma no es posible, a través de la contabilidad pública, conocer el desarrollo de las operaciones de ejecución de los proyectos ni las efectivas incorporaciones de los citados remanentes, por lo que hay que acudir directamente a los centros gestores para recabar información al respecto.

Además de dificultar la fiscalización, esta circunstancia complica el conocimiento por el centro gestor de la evolución de los remanentes del FCI y favorece la confusión en la determinación del gasto total y de los remanentes del FCI.

b) Es habitual la financiación conjunta de proyectos correspondientes al FCI con remanentes de créditos vinculados a dicho Fondo y de créditos ordinarios, aspecto que no tendría mayor importancia si existiese un concepto presupuestario específico para la contabilización del FCI. Al no existir esta diferenciación, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, el hecho de la cofinanciación de proyectos viene a dificultar, tanto la fiscalización del empleo de los remanentes del FCI, como el adecuado seguimiento de la ejecución de los proyectos.

c) Frecuentemente se ha observado una indefinición de los proyectos tal como aparecen consignados en los anexos correspondientes de los presupuestos. Varios han sido fraccionados en otros más concretos. Los centros gestores correspondientes no han considerado necesario acudir a la fórmula prevista en la Ley 7/1984 para la autorización de modificaciones de los proyectos (aprobación por Consejo de Ministros) por entender que no se trataba en realidad de una sustitución de proyectos. La indefinición de éstos impide comparar adecuadamente la ejecución prevista y la real para cada proyecto.

d) En términos generales, puede afirmarse que los remanentes del FCI han sido aplicados a la financiación de inversiones de infraestructura en las modalidades previstas en el artículo 6º de la Ley 7/1984 del FCI.

e) Se ha observado, en numerosos casos, el incumplimiento del artículo 79 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, al no incorporarse en su totalidad al ejercicio de 1990 los remanentes de crédito del FCI de ejercicios anteriores que existían a 31 de diciembre de 1989. Hay que señalar que en los casos en los que el proyecto se encuentre totalmente realizado sin haber sido agotado el crédito correspondiente, el cumplimiento literal de este precepto no tiene sentido. No obstante, el remanente podría haber sido aplicado a la ejecución de otro proyecto en la misma Comunidad Autónoma, previa aprobación de la correspondiente situación, al objeto de no desvirtuar el reparto territorial de los créditos del FCI.

f) En términos generales se han respetado los principios determinantes del reparto territorial del FCI, excepto en aquellos casos en los que no se incorporaron al ejercicio de 1990 los remanentes existentes.

III.- FCI. GESTIONADO POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Se efectúa aquí un análisis financiero del FCI gestionado por la Administración Autonómica en su conjunto. Los distintos informes que por mandato legal y en número de nueve han sido elaborados de forma separada en este ejercicio, por este Tribunal o por los Órganos de Control Externo, conteniendo el detalle de los proyectos de inversión se adjuntan en volumen adicional, en cumplimiento del art. 9.2 de la Ley 29/1990.

Por otra parte, el análisis de los remanentes de las dotaciones de ejercicios anteriores incorporados a 1990 de las Comunidades Autónomas carentes de dotación en este ejercicio se incluye, en su caso, en epígrafe independiente de los respectivos informes territoriales.

III.1.- FINANCIACION

La dotación asignada al FCI -concepto 755- en la sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, asciende a 120.044 millones de pesetas, distribuidos entre nueve Comunidades Autónomas beneficiarias, en lugar de las diecisiete Comunidades entre las que se distribuía hasta 1989.

Para equilibrar este hecho novedoso dentro del comportamiento de este mecanismo financiero, en la misma sección 33 citada se dota un importe de 119.758 millones de pesetas en el concepto 756 "Compensación Transitoria" (CT), que se distribuye entre todas las Comunidades Autónomas, excepto la Foral de Navarra.

En consecuencia, la dotación de la sección presupuestaria FCI de 1990 asciende a un total de 239.802 millones de pesetas, recogiéndose su distribución y representación porcentual por Comunidades en el siguiente estado:

CC.AA.	DOTACIONES			% SOBRE DOTACIONES		
	FCI	CT	TOTAL	DEL FCI	DE LA CT	DEL TOTAL
ANDALUCIA	47.542	18.194	65.736	40	15	27
ARAGON	—	4.536	4.536	—	4	2
CANARIAS	9.958	4.079	14.037	8	3	6
CANTABRIA	—	1.830	1.830	—	1	1
C.-LA MANCHA	11.526	4.413	15.939	9	4	7
C. Y LEON	7.972	10.330	18.302	7	9	8
CATALUÑA	—	26.330	16.330	—	22	11
EXTREMADURA	10.581	4.920	15.501	9	4	6
FORAL DE NAVARRA	—	—	—	—	—	—
GALICIA	19.446	8.100	27.546	16	7	11
ISLAS BALEARES	—	1.612	1.612	—	1	0,7
LA RIOJA	—	675	675	—	0,6	0,3
MADRID	—	12.065	12.065	—	10	5
PAIS VASCO	—	11.577	11.577	—	10	5
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.097	3.219	4.316	1	3	2
REGION DE MURCIA	4.680	499	5.179	4	0,4	2
VALENCIANA	7.242	7.379	14.621	6	6	6
TOTAL	120.044	119.758	239.802	100	100	100

III.2.- ANÁLISIS DE LAS DOTACIONES

a) Examen de los créditos

En el anexo FCI-5 se recoge la liquidación presupuestaria de los créditos afectados a los distintos Fondos, por el conjunto de operaciones realizadas y presentadas por las Comunidades Autónomas durante el ejercicio 1990.

Dicho anexo constituye un resumen de las diecisiete liquidaciones que han sido fiscalizadas, por este Tribunal o por los correspondientes Organos de Control Externo. En 1990 el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado directamente el FCI en 10 Comunidades, de las que cinco eran beneficiarias del Fondo de este ejercicio, y el resto sólo gestionaban proyectos vinculados al FCI de ejercicios anteriores.

El estado que presenta la citada liquidación, distribuida por los distintos Fondos a los que afecta, es el siguiente:

(En millones de pesetas)

Ejerc.	Créditos iniciales	Modificaciones			Créditos Finales	Obligaciones Reconocidas	Remanente de crédito
		Incorps.	Otros aumentos	Bajas			
1990	133.963	—	872	7.299	127.536	95.843	31.693
1989	—	52.577	—	34	52.543	42.263	10.280
1988	—	12.242	—	—	12.242	8.233	4.009
Anteriores	—	10.773	—	—	10.773	4.916	5.857
TOTAL	133.963	75.592	872	7.333	203.094	151.255	51.839

El examen del anexo muestra unos créditos iniciales de 133.963 millones de pesetas, evidenciándose un exceso sobre la dotación inicial para el FCI de 1990 de 13.919 millones, que pone de manifiesto errores en la presupuestación inicial por el importe y Comunidades siguientes:

- 7.299 millones de pesetas presupuestados en exceso sobre la dotación del FCI por la Comunidad Autónoma de Andalucía, hecho que posteriormente regulariza a través de la correspondiente modificación presupuestaria.
- 3.207 millones de pesetas presupuestados en exceso por la Comunidad Autónoma de Canarias, al imputar al FCI parte del importe correspondiente a la Compensación Transitoria.
- 3.413 millones de pesetas correspondientes a la diferencia entre el crédito inicial consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 a la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el crédito inicial registrado por dicha Comunidad.

Los citados créditos alcanzan posteriormente 203.094 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 51% por modificaciones presupuestarias.

El importe neto de las modificaciones presupuestarias de crédito que ascienden a 69.131 millones de pesetas no contempla, en términos generales, los créditos incorporables procedentes del FCI de 1989, por valor de 13.418 millones de pesetas, que se declararon no disponibles en dicho ejercicio por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 1989, excepto en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Extremadura y Valenciana, que no procedieron a efectuar ajuste alguno al FCI de 1989.

b) Examen de las obligaciones reconocidas

El citado anexo presenta igualmente las obligaciones reconocidas por Comunidades Autónomas, cuyo importe total asciende a 151.255 millones de pesetas, equivalente al 74% sobre el crédito final, lo que representa el grado de ejecución medio del FCI de 1990. Dicho grado es superior al registrado en 1989, que alcanzó el 67%.

En el anexo FCI-6, figuran las obligaciones reconocidas distribuidas por sectores de inversión. Su examen evidencia el destino dado a los recursos procedentes del FCI de acuerdo con las necesidades preferentes de cada una de las Comunidades, destacando el sector de Obras Públicas (32%) como más significativo en su conjunto, y especialmente en aquellas Comunidades Autónomas beneficiarias del FCI en 1990.

Los remanentes de crédito importan 51.839 millones de pesetas, que supone el 26% sobre los créditos finales, siendo su distribución por los distintos Fondos a los que afecta, la siguiente:

FCI/1990	31.693	61%
FCI/1989	10.280	20%
FCI/1988	4.009	8%
FCIs. anteriores	5.857	11%
TOTAL	51.839	100%

Como puede observarse en el citado anexo FCI-6, seis Comunidades han liquidado todos los créditos vinculados al FCI y una de ellas -Islas Baleares- prácticamente los ha liquidado también. No obstante hay siete Comunidades que aún mantienen créditos vinculados a proyectos del FCI no ejecutados, anteriores a 1988 por el citado importe de 5.857 millones de pesetas, siendo éstas las siguientes:

COMUNIDAD	REMANENTES (En millones de pesetas)
ANDALUCÍA	3.099
ARAGÓN	153
CANARIAS	605
CANTABRIA	34
CASTILLA Y LEÓN	277
EXTREMADURA	829
GALICIA	860

Memoria de Actuaciones Jurisdiccionales

I. INTRODUCCIÓN

II. PRINCIPALES PROBLEMAS PLANTEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y SOLUCIONES PROPUESTAS

II.1. Sala de apelación

II.2. Departamentos de primera instancia

II.3. Unidad de actuaciones previas

III. CUADRO DE DATOS SOBRE EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

I.- INTRODUCCIÓN

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en consonancia con lo establecido en el art. 12 a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del propio Tribunal, ha preparado la Memoria de actuaciones jurisdiccionales que ahora se presenta, correspondientes al ejercicio económico de 1990. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el mencionado precepto, ha formulado al Pleno del Tribunal la correspondiente propuesta, a fin de que se apruebe, y, posteriormente, de que se incorpore al Informe o Memoria anual a que aluden los arts. 136.2 de la Constitución y 13 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de este Tribunal, y en los términos a que se refiere el citado art. 13, apartado 3, de la expresada Ley Orgánica.

En el referido ejercicio de 1990, las actuaciones de la Sección de Enjuiciamiento tuvieron lugar durante un período de tiempo en el que se comienzan a aplicar con plenitud los preceptos de la Ley citada 7/1988, relativos a los procedimientos a través de los cuales se canaliza el ejercicio de la jurisdicción contable.

El ejercicio correspondiente a 1989, así como, en la medida en que la nueva Ley estuvo en vigor, el de 1988, se vieron notablemente incididos por las disposiciones transitorias de la referida Ley, lo que implicó de hecho la prórroga legal de las normas procedimentales que dicha ley derogaba, y, por tanto, una inevitable lentitud en la aplicación de la nueva normativa.

La progresiva desaparición de la referida situación de transitoriedad, junto con la implantación de una nueva estructura en la Sección de Enjuiciamiento, derivada de la estructura departamental que configuró la relación de puestos de trabajo del personal funcionario y del personal laboral al servicio de este Tribunal -aprobado por Acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 1989-, y que supuso la dotación a dicho órgano de la base organizativa y humana necesaria para el desempeño de sus competencias, permitieron que durante el ejercicio de 1990 las normas de procedimiento creadas en 1988, para el enjuiciamiento contable, gozasen de aplicación casi plena.

De conformidad con el marco de competencias que tanto la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, como la Ley 7/1988, de 5 de abril, atribuyen a la Sección de Enjuiciamiento, la sistemática empleada en la presente Memoria va a distinguir la Sala de Apelación de la citada Sección de Enjuiciamiento, de los Departamentos de Primera Instancia y de la Unidad de Actuaciones Previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables, que aunque se trata de una unidad administrativa y no jurisdiccional, según previene el art. 11.3 de la Ley 7/1988, no obstante los expedientes que en ella se tramitan suponen un antecedente necesario y un soporte previo del correspondiente proceso jurisdiccional contable. La apuntada diferenciación sistemática va a seguirse, pues, en los dos apartados de que consta la Memoria: de un lado, los principales problemas planteados durante el ejercicio, así como las soluciones propuestas; y, de otro, el cuadro de datos sobre el estado y funcionamiento de la Sección de Enjuiciamiento.

II.- PRINCIPALES PROBLEMAS PLANTEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y SOLUCIONES PROPUESTAS

II.1.- SALA DE APELACIÓN

Por lo que se refiere a la Sala de Apelación de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, debe significarse que, durante el presente ejercicio, se suscitaron diversos problemas, que tienen como común denominador estar originados por las lagunas legislativas o las dificultades de interpretación tanto de la Ley Orgánica 2/1982 como de la más reciente Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, problemas éstos que, unidos a la reestructuración del organismo en general y en especial, de la Sección de Enjuiciamiento, y a la escasez de medios humanos y técnicos, han sido en gran parte motivo de la demora en la tramitación de los procedimientos y, consecuentemente, de la acumulación de los recursos objeto de su actividad jurisdiccional.

Precisamente, a resolver estos problemas, de un lado de carácter procesal, y de otro, de definición de su ámbito competencial, se ha dirigido fundamentalmente la actividad de la única Sala de Apelación que existe en el Tribunal de Cuentas, entre los que destacan los siguientes:

a) Los recursos en alzada, previstos y sustanciados al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

b) Los recursos del artículo 42.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

c) La delimitación de la jurisdicción contable: cuestiones de compatibilidad entre la jurisdicción penal y contable.

d) Definición del sector público y de las ayudas y subvenciones como objeto de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

e) Problemas de dotación en recursos humanos y medios materiales de la Sala: su estructura y funcionamiento.

Seguidamente se comentan las cinco cuestiones apuntadas.

a) Los recursos del artículo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Una de las novedades que introdujo la Ley de Funcionamiento citada, de 5 de abril de 1988, fue la creación de un recurso, precisamente en su artículo 48.1, contra las resoluciones dictadas "en la pieza separada a que hace referencia el artículo 45" (preparatoria del juicio de cuentas) o "en las actuaciones prevenidas en los artículos 46 y 47", al que se señala un cometido o finalidad muy concreta, determinando que los presupuestos objetivos que pueden servir de motivo de impugnación son dos: que en la fase de instrucción del correspondiente procedimiento no se haya accedido a completar las diligencias solicitadas por los comparecidos en las respectivas actuaciones, o que se causare indefensión a alguna de las partes.

Sin embargo, la Ley, que se limita a establecer que el recurso se dará ante la Sala del Tribunal y se interpondrá en el plazo de cinco días, no contiene norma alguna sobre el procedimiento a seguir en el citado recurso, planteando así la necesidad de un doble esfuerzo interpretativo: la delimitación de las resoluciones susceptibles del referido medio de impugnación y la adopción de un procedimiento lo más adecuado posible a la naturaleza especial y sumaria del nuevo recurso contable.

Merece destacarse que la Unidad de Actuaciones Previas, a que se refiere el artículo 11 de la Ley 7/1988, según se trata en otro apartado de esta memoria, inició su funcionamiento como tal en el segundo trimestre de 1990, lo que puso de relieve la necesidad de decidir estos problemas sobre la sustanciación y resolución de los mencionados recursos.

En cuanto a la primera cuestión suscitada, la Sala se pronuncia en distintas resoluciones, especialmente en sus sentencias de fechas 24 de septiembre y 30 de octubre de 1990, definiendo el repetido recurso como un medio de impugnación dirigido a combatir resoluciones dictadas en la fase preparatoria de los procesos jurisdiccionales contables, cuya finalidad no es perseguir un conocimiento concreto de los hechos objeto de debate en una segunda instancia jurisdiccional, sino ofrecer a los intervinientes en las actuaciones previas o preparatorias la posibilidad de revisar aquellas resoluciones que disminuyan sus medios de defensa o en que se les cause indefensión, ofreciendo para ello un cauce especial y sumario, lo que lleva a rechazar las alegaciones que aducen los recurrentes exclusivamente sobre el fondo del asunto, por considerar que no es el momento procesal oportuno para ello ni el medio adecuado este recurso del art. 48.1.

Por lo que se refiere al procedimiento a seguir, se adoptó la solución que en principio ofrecía más oportunidades de defensa a los interesados y que mejor se acomodaba al carácter de alzada del recurso, y habida cuenta de que una gran parte de los procedimientos en tramitación lo eran con arreglo al derecho transitorio de la Ley 7/1988, se decidió darles la misma tramitación del recurso de apelación que se sigue contra las resoluciones de primera instancia de los Consejeros de Cuentas.

Sin embargo, la experiencia derivada de tal modo de proceder puso de manifiesto que el cauce fijado en la Ley para el recurso de apelación no era el más adecuado a la finalidad de un recurso sumario y limitado, como el del art. 48.1 de la Ley 7/1988, en el que la agilidad y rapidez en su resolución, forman parte de la naturaleza del recurso y del propio derecho de defensa del recurrente.

b) Los recursos contra resoluciones de la Administración que declaran responsabilidades contables.

Ha sido una novedad de la Ley Orgánica 2/1982 el criterio de residenciar en el Tribunal de Cuentas toda la materia relativa a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables, y la Ley lo materializa reconociendo al Tribunal la facultad de declarar dichas responsabilidades, bien mediante la avocación de los asuntos incoados en la vía administrativa, conforme al artículo 41.1 de dicha Ley Orgánica, o bien atribuyéndole, directamente y con carácter exclusivo, el conocimiento del recurso jurisdiccional procedente contra los actos dictados en vía administrativa declarativos de responsabilidades contables distintas del alcance.

Este recurso, reconocido en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica y en el 54.1 de su Ley de Funcionamiento, y del que conoce la Sala del Tribunal de Cuentas en única instancia, carece, como el recurso del artículo 48.1 mencionado en el apartado precedente, de denominación y regulación específica en ambos textos legales, por lo que se ha seguido sustanciando por los trámites del recurso contencioso-administrativo en primera instancia, por considerar que es el más adecuado a la naturaleza administrativa de los actos o resoluciones que se recurren, al derecho supletorio establecido en la disposición final segunda 2 de la citada Ley Orgánica, y al criterio legal seguido en el artículo 12 del Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, que señala el plazo de dos meses para recurrir ante el Tribunal de Cuentas, similar al señalado en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para el recurso ordinario de primera instancia.

Merece destacarse en relación con los recursos interpuestos al amparo del citado artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, y siguiendo la misma trayectoria de ejercicios precedentes, su escasa utilización, hasta el punto de que sólo se interpuso en el presente ejercicio un único recurso, lo que denota que, tanto en la esfera administrativa estatal, como en la autonómica y local, los expedientes administrativos de responsabilidad contable se siguen revelando como prácticamente inexistentes, muestra evidente de que continúan teniendo escasa aplicación y cumplimiento las normas de los artículos 140 y siguientes de la Ley General Presupuestaria y del Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, regulador de tales expedientes, así como la legislación autonómica y local en cuanto imponen la obligación a los órganos administrativos de incoar los oportunos expedientes y su comunicación al Tribunal de Cuentas.

c) Delimitación del ámbito de la jurisdicción contable: su compatibilidad con la jurisdicción penal.

Desde que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas declaraba la compatibilidad de las jurisdicciones penal y contable respecto de unos mismos hechos enjuiciables, la Sala de Apelación ha realizado una constante y asidua labor interpretativa del referido principio de compatibilidad, definiendo los efectos de sus respectivos pronunciamientos y delimitando los cometidos que a cada orden jurisdiccional atribuye el ordenamiento jurídico vigente.

En este orden de cosas, la sentencia de la Sala de Apelación de 14 de marzo de 1990 acordó estimar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia de 21 de junio de 1986, que declaró responsable directo y único al apelante, siendo así que la Audiencia Provincial le absolvió del delito de malversación de fondos públicos, al estimar que no concurría en el encausado el requisito de abandono o negligencia inexcusables; decisión que la Sala fundamenta, invocando el precedente contenido en el Auto de la misma Sala de 9 de septiembre de 1987, en que "la compatibilidad no puede ser interpretada como una posibilidad legal de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos por los mismos hechos, estos hechos existan para un órgano estatal y no existan para el otro".

Por otra parte, la Sala de Apelación del Tribunal de Cuentas dictó Sentencia de fecha 18 de mayo de 1990 sobre un asunto fallado en primera instancia en que se declaró responsable directo y único al titular de una Administración de Loterias.

El recurrente fundamentó el recurso alegando que la resolución "a quo" se muestra contraria a lo dispuesto en el artículo 1105 del Código Civil e infringe el derecho fundamental a la igualdad jurídica establecido en el artículo 14 de la Constitución, argumentando, asimismo, que el Tribunal de Cuentas no puede decidir sobre la existencia de culpa sin haberse pronunciado previamente la jurisdicción penal.

En los fundamentos jurídicos, la Sala rebate las alegaciones del recurrente al mismo tiempo que hace constante mención de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de octubre de 1986 y de la dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 6 de junio de 1989, por las que se condena al titular de la Administración de Loterias por un delito de malversación de caudales públicos por negligencia grave, y siendo así, no es preciso invocar -dice la Sala de Apelación del Tribunal de Cuentas- la regla de la prejudicialidad penal ni el carácter prevalente de la jurisdicción del mismo orden, puesto que, en éste, lo fallado por ambas jurisdicciones es notoriamente coincidente.

En la Sentencia se hace constar, además, que el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/1982 afirma la compatibilidad de la jurisdicción penal y contable, así como la compatibilidad de ésta con el ejercicio de la potestad disciplinaria. En su virtud, la Sala decide desestimar el recurso y confirmar la Sentencia recurrida.

d) Definición del sector público y de las ayudas o subvenciones susceptibles de fiscalización por el Tribunal de Cuentas.

Los órganos jurisdiccionales de la Sección de Enjuiciamiento y, entre ellos, la Sala de Justicia, a través de la doctrina declarada en sus resoluciones, han ido desarrollando y delimitando el ámbito de su propia competencia y funciones, cuya finalidad, en último término, es enjuiciar la responsabilidad contable en que incurren quienes causen daños y perjuicios a los caudales o efectos públicos.

Esta responsabilidad alcanza, por expresa disposición de los artículos 4 y 38 de la Ley Orgánica 2/1988 del Tribunal de Cuentas, y del artículo 49.1 de su Ley de Funcionamiento, a las personas o entidades perceptores de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público, lo que ha obligado a la Sala a pronunciarse respecto a qué debe entenderse por "sector público" y sobre el concepto de "ayudas o subvenciones" susceptibles de la fiscalización y enjuiciamiento contable del Tribunal.

Entre las múltiples resoluciones de la Sala, de las que cabe señalar por todas, y como antecedente, las sentencias de fechas 18 de abril y 28 de octubre de 1986 y los Autos de 11 y 18 de enero de 1986, en el presente ejercicio son aportaciones a esta cuestión las consideraciones del Auto de la Sala de fecha 5 de noviembre de 1990, que estima en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el Auto del Consejero de Cuentas de 11 de junio de 1987, dictado en un procedimiento de reintegro por alcance, del Ramo de Aduanas, en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que declaró la incompetencia del Tribunal de Cuentas para conocer los hechos objeto del procedimiento.

Frente al criterio del Ministerio Fiscal, la Sala entiende que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, no forma parte de la Administración estatal ni de la local, en ninguna de las formas organizativas directas o indirectas, lo que conduce a la conclusión de que sus recursos propios no pueden calificarse como "fondos", "caudales" o "efectos públicos", y estando probado el Consorcio tiene a su disposición y administra tasas para el servicio que presta a los particulares; recargos sobre determinadas contribuciones; sumas ingresadas por los particulares por infracción de sus Reglamentos; importes abonados por los daños causados por aquéllos a las obras o instalaciones del Consorcio; producto de los empréstitos y demás operaciones financieras previamente autorizadas por el Ministerio de Hacienda, así como cantidades de otra procedencia, sólo las subvenciones del Estado, Provincia o Municipio son fiscalizables por el Tribunal, lo mismo que lo serían los avales u otras ayudas que pudiera recibir del Sector Público, a tenor, todo ello, de lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley Orgánica 2/1982. Se hace constar que el Consorcio, por lo menos durante el ejercicio de 1982, únicamente dispuso de medios de financiación propios, no habiendo recibido subvenciones, por lo que no cabe exigir responsabilidades contables, ni en la vía administrativa prevista por la Ley General Presupuestaria, ni en la vía jurisdiccional prevista en la Ley Orgánica 2/1982. Aunque todo ello sin perjuicio de la posible incoación de procedimientos en otro orden jurisdiccional.

Es coherente el Auto con la exigencia de la naturaleza pública que han de tener los caudales y efectos para que sea, con otros requisitos, competente el Tribunal de Cuentas, de ahí que la Sala estime en parte la apelación, declarando la competencia del Tribunal de Cuentas en relación con las posibles subvenciones recibidas del sector público en el período entre el 11 de enero de 1987 y el 30 de noviembre de 1983, y cuya responsabilidad contable no esté prescrita.

e) Dotación de recursos humanos y medios técnicos y material de la Sala de Apelación.

Superados los primeros momentos que siguieron a la aprobación y publicación de la Ley 7/88, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, a pesar de las dificultades de tramitación de los procedimientos de nueva creación, en gran parte huérfanos de regulación procesal, se advirtió un notable incremento del trabajo que realiza la Sala, y de su actividad jurisdiccional, que no fue acompañada del aumento de los medios personales, técnicos y materiales, que parecía aconsejable en razón a las nuevas circunstancias del organismo público.

Por Acuerdo del Tribunal de Cuentas de fecha 30 de mayo de 1989, se aprobaron las nuevas relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral al servicio del Tribunal y se asignó a la Sala de Enjuiciamiento la siguiente estructura orgánica y funcional:

- Un Secretario de la Sala encargado de la tramitación de los procedimientos, de la realización de informes y propuestas de resolución y ejercicio de la fe pública judicial.
- Un Analista de contabilidad para el asesoramiento técnico contable de los expedientes.
- Un Ayudante de Secretaría de Sala, que colabora con el Secretario de la Sala en las tareas que realice.
- Un Auxiliar, de apoyo en las tareas administrativas.

Durante el ejercicio a que se refiere esta Memoria, los mencionados puestos de trabajo no se cubrieron en su totalidad, circunstancia que muestra la situación excepcional en que se realizaron las tareas de la Sala de Apelación durante el ejercicio, que en la práctica fueron desarrolladas exclusivamente por el Secretario de Sala y un ayudante. Todo ello, como es fácil colegir, provocó alguna demora en la tramitación de los procedimientos y, en definitiva, cierta acumulación en los recursos pendientes de resolución en la Sala. La posible paralización en el desarrollo de los procedimientos afectó no tanto a la normal tramitación como a su resolución definitiva, lo que pudo permitir una mayor agilidad en la actividad jurisdiccional de la Sala del ejercicio siguiente.

II.2.- DEPARTAMENTOS DE PRIMERA INSTANCIA

La aplicación cotidiana de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas fue poniendo de manifiesto, de un lado, su necesidad y utilidad y, de otro, los problemas interpretativos que planteaba.

Al no ser la exhaustividad el principio que guía a estos comentarios, se va a evitar ser prolijo a la hora de enunciar y comentar los referidos problemas de interpretación, por lo que tan sólo algunos aspectos van a ser seguidamente considerados.

Tomando como criterio selectivo su repercusión en la marcha del procedimiento, así como su mayor trascendencia, se han elegido tres cuestiones concretas:

a) La publicación de edictos.
b) El momento procesal de determinación de la cuantía.
c) La intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos de reintegro por alcance.

Sin perjuicio de lo anterior, y como cuestión previa al desarrollo de los tres temas señalados, es oportuno hacer una breve mención a la problemática planteada en relación con la figura jurídica de los juicios de cuentas.

Como en Memorias precedentes -1988 y 1989- la escasa incidencia de los juicios de cuentas en la actividad jurisdiccional desarrollada por este Tribunal, y más concretamente, por su Sección de Enjuiciamiento durante el período a que esta Memoria afecta merece una especial atención. Para explicar la afirmación anterior no se puede olvidar que la pieza separada a que se refiere el art. 45 de la Ley de Funcionamiento compete en lo que al acuerdo de su formación respecta, al Consejero de Cuentas que estuviere entendiendo del procedimiento fiscalizador o examen y comprobación de cuentas de que se trate, su objeto lo constituyen hechos supuestamente constitutivos de responsabilidad contable distinta del alcance, y se concibe como una actuación a practicar en el seno de la Sección de Fiscalización, de carácter preparatorio de la fase jurisdiccional a desarrollar a través del juicio de cuentas. La pieza separada debería ser, en consecuencia, la fuente primordial de nutrición de esta clase de procedimientos, sin olvidar, claro está, los denominados expedientes administrativos de responsabilidad contable regulados en los arts. 144 y concordantes

de la Ley General Presupuestaria, cuya tramitación se recoge en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, y sobre los que el Tribunal de Cuentas tiene competencia para conocer, bien sea haciendo uso de la facultad de recabar el conocimiento del asunto que le atribuye el art. 41 de la Ley Orgánica 2/1982, bien sea por vía de recurso (conocerá la Sala en única instancia) contra la resolución dictada en dicho expediente administrativo.

Pues bien, tanto un caso como el otro son realmente excepcionales en su utilización, lo cual arroja como resultado inevitable la escasa incoación de juicios de cuentas por los Consejeros adscritos a la Sección de Enjuiciamiento. De una parte, porque son ciertamente muy pocas las piezas separadas elaboradas, y de otra porque la Autoridad administrativa a quien corresponde incoar expediente administrativo no ha comunicado su iniciación, no observándose de este modo lo previsto expresamente en los arts. 41.1 de la Ley Orgánica, 144.1 de la General Presupuestaria y 1.4 del Real Decreto 700/1988. Abundando no obstante en el trato ofrecido por los expedientes administrativos de responsabilidad contable en el sentido de que se han revelado como inexistentes, esto precisa plantear que, dado que hay un Real Decreto regulador de tales expedientes -el ya citado 700/1988, de 1 de julio-, e incluso una Unidad en el Ministerio de Economía y Hacienda encargada de su tramitación (cuando menos al nivel de la Administración estatal), habrá que promover el cumplimiento del art. 41.1 de la Ley Orgánica, que establece la obligación de que la Autoridad administrativa que acuerde la incoación del expediente lo comunique al Tribunal de Cuentas, y, de este modo, no quede sustraido del ámbito de competencia objetivo de la jurisdicción contable un género de infracciones cuyo conocimiento originario le corresponde por imperativo legal.

Dicho lo anterior se pasa seguidamente a desarrollar los tres temas que fueron enunciados más arriba.

a) La publicación de edictos

La Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al regular el procedimiento en el juicio de cuentas, y el procedimiento de reintegro por alcance, establece imperativamente el anuncio mediante edictos de los hechos supuestamente motivadores de responsabilidad contable, con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose debidamente.

Dado que en los procedimientos declarativos de responsabilidad contable se halla involucrado el interés público, el legislador creyó oportuno introducir ese requisito de especial publicidad del procedimiento, al igual que previamente hizo en la Ley correspondiente para el procedimiento contencioso-administrativo.

La Ley 7/1988 establece que los referidos edictos deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Estado, y en el Boletín Oficial de la provincia donde los hechos hubieren tenido lugar. Además, si dichos hechos se refieren a la actividad económico-financiera de las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, la publicación se efectuará también en el Boletín Oficial de la Comunidad correspondiente.

La realización de todas las publicaciones legalmente requeridas es necesaria antes de poder seguir adelante con el procedimiento y de que, en su virtud, se puedan formalmente plantear, mediante la oportuna demanda, pretensiones de responsabilidad contable.

La práctica cotidiana ha evidenciado que al ser el proceso de publicación de edictos inevitablemente largo, el procedimiento seguido ante la jurisdicción contable sufre serias dilaciones que, en definitiva, perjudican a todos los intereses que se hallan en juego. La experiencia hasta ahora acumulada permite decir que el período de tiempo que usualmente se consume en coronar el proceso de publicación de edictos, oscila entre los tres y los cuatro meses, siendo a veces incluso superior, pero no bajando nunca de los dos meses.

De otro lado, la experiencia también ha puesto de manifiesto que solamente se personan en las actuaciones aquéllos que, sin perjuicio de la publicación de edictos, son personalmente emplazados, sin que se haya dado un solo caso en que una persona o entidad no personalmente emplazada haya comparecido en las actuaciones atendiendo a la convocatoria hecha por los edictos.

Todo lo anteriormente dicho plantea un interesante tema de reflexión de cuya consideración podría llegar a plantearse la conveniencia de acometer, en su día, determinadas modificaciones.

b) El momento procesal de determinación de la cuantía

Otra de las novedades que introdujo la Ley 7/1988, dentro del aspecto de la regulación de los procedimientos jurisdiccionales de responsabilidad contable, fue la exigencia en todos ellos de un pronunciamiento expreso sobre la cuantía litigiosa. En efecto, el art. 62 de dicha Ley que, a su vez, integra el contenido del Capítulo V "De la cuantía de los procedimientos", del Título V "De la jurisdicción contable y de sus procedimientos", expresa en su párrafo 3º que "el órgano de la jurisdicción contable que conociere del asunto hará la determinación de la cuantía en resolución motivada una vez tenga los datos a que se refieren los párrafos anteriores, (valor de la pretensión) previa audiencia de las partes comparecidas por plazo no superior a cinco días y sin que por ello se interrumpa el curso de los autos".

Los efectos de la declaración de la cuantía litigiosa son fundamentales para la posterior tramitación procesal. Así, con independencia de servir de fundamento a ulteriores recursos, es, concretamente en el ámbito del procedimiento de reintegro por alcance, el hito principal que marca la elección de los trámites formales a seguir en el desarrollo posterior del proceso. En este sentido, basta recordar que la tramitación de los procedimientos por alcance se ha de regir conforme a las reglas "del juicio declarativo que corresponda a la cuantía del alcance según la Ley de Enjuiciamiento Civil" (art. 73.2 de la Ley de Funcionamiento) y Decreto de 21 de noviembre de 1952. Ello significa que la resolución motivada que decida la cuantía, tendrá, además, la virtualidad de designar a las partes el tipo de juicio declarativo civil por el que se van a sustanciar sus pretensiones.

La aludida resolución ofrece también la característica de ser firme, ya que contra la misma la Ley no otorga recurso alguno, sin perjuicio, como dispone el nº 4 del mismo art. 62, de que la parte disconforme pueda, en su día, fundar el de queja en su indebida fijación cuando, por razón del valor asignado, fuere rechazado cualquier recurso precedente con arreglo a lo establecido en la propia Ley de Funcionamiento.

El principal problema que planteó el incidente en cuestión, durante los primeros momentos de aplicación de la nueva Ley, fue el de decidir su ubicación en el proceso, habida cuenta los efectos que conlleva. La única solución fue localizarle en los primeros trámites del procedimiento y ello con el objetivo esencial de que las partes intervinientes en el mismo sepan ya desde el inicio las normas por las que se van a dilucidar sus pretensiones de responsabilidad contable, quedando garantizada así, su seguridad jurídica procesal.

Ahora bien, la anterior localización se ve condicionada por el dato -en terminología legal- que le sirve de fundamento, el cual no es sino "el valor de la pretensión de responsabilidad contable que se ejercite" (art.62.1). Por ello, es necesario esperar a que la demanda haya sido interpuesta, lo cual supone una manifestación más del principio dispositivo y del deber de congruencia, aplicables plenamente al proceso contable, y, una vez ello, será imprescindible oír a las restantes partes, antes de contestar a la demanda, y decidir la cuantía; todo lo cual, ha de producirse sin interrumpir el curso de los autos. No obstante el deseo del legislador, es lo cierto que la práctica diaria pone de manifiesto que la obligada introducción del incidente de cuantía supone una distorsión de la marcha normal del proceso, que se hace más patente en los juicios de alcance de mínima cuantía en los que, por seguir las reglas del juicio verbal, la contestación a la demanda no es escrita sino que tiene lugar de forma verbal en el propio juicio.

En cualquier caso, el problema planteado es consecuencia del propio sistema de la Ley de Funcionamiento de regular el proceso contable utilizando técnicas de remisión a otras normas.

c) Intervención del Ministerio Fiscal en los Procedimientos de Reintegro por Alcance

La Ley Orgánica de 1982 fue la primera norma que entroncó la Fiscalía del Tribunal de Cuentas -prevista como órgano propio del mismo en su art. 19.g)- con el Ministerio Fiscal, entendido éste -art. 124.1 de la Constitución- como promotor de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley y garante de la independencia de los Tribunales y de la satisfacción del interés social.

Esta vinculación quedó sustentada en la dependencia funcional de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas respecto del Fiscal General del Estado -art. 27-, en la pertenencia del Fiscal a la Carrera y en su nombramiento por el Gobierno en la forma determinada en el Estatuto Orgánico -art. 32-, todo ello sin perjuicio de las menciones correspondientes en dicho Estatuto, en especial arts. 12.2, 36, en relación con el 35.1.c), y concordantes.

Pero la Ley Orgánica no hizo precisión alguna en punto a las funciones específicas de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, limitándose a la regulación anteriormente expuesta.

La Ley de Funcionamiento de 1988 sí descendió a enumerar las funciones en especial atribuidas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas -art. 16.2-, delimitando como propias, desde el punto de vista del enjuiciamiento contable, la toma de conocimiento de todos los procedimientos jurisdiccionales que se sigan en el Tribunal a efectos de esclarecer las posibles responsabilidades contables que de ellos puedan derivarse y el ejercicio de la acción de responsabilidad contable y deducción de las pretensiones de esta naturaleza en los juicios de cuentas y procedimientos de reintegro por alcance.

Si acudimos ahora a la regulación procesal concreta, tanto en sede de actuaciones previas como de juicios contables, la intervención de la Fiscalía figura, con mayor o menor precisión para las primeras y para los juicios de cuentas, e incluso para los no contenciosos expedientes de cancelación de fianzas, no así para los procedimientos de reintegro por alcance.

En efecto. En la pieza separada -art. 45-, el Ministerio Fiscal puede instar su formación y, una vez acordada, solicitar que se incorporen a la misma los antecedentes que estime oportunos en orden a la finalidad legalmente prevista. En las diligencias del art. 46.2 previamente al archivo o a la resolución que, en su caso, se adopte, ha de ser oído. Y en las diligencias de instrucción debe ser citado para la práctica de la liquidación provisional del alcance.

Por lo que a los procedimientos jurisdiccionales se refiere, en los juicios de cuentas el Ministerio Fiscal debe ser emplazado para su comparecencia en el plazo de nueve días -art. 68.3-; si ninguna

demanda fuese presentada por el Sr. Abogado del Estado o el representante procesal de la entidad perjudicada, se le confiere traslado de la pieza y demás actuaciones por plazo de veinte días para que la formule si procediere -art.69.2-, y caso de que sí se hubiese presentado demanda y una vez contestada ésta -o transcurrido el plazo para ello- se le da traslado para alegaciones, por plazo de veinte días, en punto al mantenimiento o no de la pretensión de responsabilidad contable, pudiendo proponer la práctica de la prueba que considere oportuna; y siendo también posible, si se estima la pieza incompleta, reclamar los antecedentes necesarios para completarla o que se practiquen las actuaciones omitidas en la fase de actuaciones previas -art. 70-. En los expedientes de cancelación de fianzas, el Ministerio Fiscal es oído una vez que se completa la información que la ley exige, y su oposición a que la fianza se cancele transformará en contencioso el expediente -art. 76-.

En los procedimientos de reintegro por alcance el panorama es distinto. No existe ninguna duda en lo que respecta al emplazamiento del Ministerio Fiscal y su posterior personación -art. 73.1 en relación con el 68-, ni de que si no interponen demanda los supuestamente perjudicados por el alcance es a él a quien corresponde hacerlo, si procediese.

Pero la remisión que la Ley de Funcionamiento hace en bloque a los declarativos ordinarios -y por ende a la Ley de Enjuiciamiento Civil y al Decreto de 21 de noviembre de 1952- una vez hecha la publicación de edictos y transcurrido el término de los emplazamientos -art. 73.2- ha tenido como consecuencias un profundo vacío legal a la hora de dilucidarse la intervención que ha de tener el Ministerio Fiscal en las fases de alegaciones y prueba del proceso, de cara al adecuado ejercicio de las funciones que singularmente la Ley de Funcionamiento le encomienda, máxime si tenemos en cuenta que en los juicios civiles ordinarios no tiene entrada, por lo general, el Ministerio Fiscal y aquí es una de las partes diferenciadas que puede incluso deducir pretensiones de responsabilidad contable.

La interpretación sistemática de las disposiciones procesales civiles con la Ley de Funcionamiento junto con la aplicación analógica de los preceptos reguladores del juicio de cuentas han sido las fuentes que han servido de base para llenar la laguna existente. Así las cosas, en la práctica procesal contable de los procedimientos de reintegro por alcance se ha venido considerando como más ajustado con la filosofía de la Ley de 1988 y con la naturaleza que en esta Ley se dá a la intervención del Ministerio Público, que éste intervenga en dicho juicio contable, y para el caso de que se haya deducido demanda por los representantes de los interesados supuestamente perjudicados, una vez producida su contestación por la parte demandada o transcurrido el plazo concedido para ello. En aquellos declarativos en que hay una comparecencia (menor cuantía, arts. 693 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil; cognición, arts. 48 y ss. del Decreto de 1952, y verbal, arts. 722 y ss. de la expresada Ley Rituaria) éste es el momento procesal en que el Ministerio Fiscal puede alegar lo que estime conveniente en orden al mantenimiento o no de la pretensión de responsabilidad contable, fijando su postura como representante y garante de la legalidad, y haciendo uso de las posibilidades de actuación procesal previstas en el art. 16.2 de la Ley de Funcionamiento; en el mayor cuantía la identidad con el juicio de cuentas ha de ser total, por lo que concluidos los trámites de contestación a la demanda, o en su caso, de réplica y dúplica, es cuando se procede en términos de similitud a lo que establece el art. 70.2 de la Ley de Funcionamiento para el juicio contable tipo.

Para evitar el problema descrito lo mejor sería que la Ley de Funcionamiento incorporase un precepto de muy parecida factura al ante citado del juicio de cuentas, en el que, teniendo en consideración la variedad de tramitación procesal de los cuatro declarativos ordinarios, se fije la intervención del Ministerio Fiscal para ejercitar las acciones, deducir las pretensiones y formular las alegaciones que tuviera por conveniente en los términos que han quedado descritos.

II.3.- UNIDAD DE ACTUACIONES PREVIAS

En lo que atañe a la Unidad de Actuaciones Previas interesa resaltar la incidencia que sobre la fase instructora de los procedimientos de reintegro por alcance tuvo la relación de puestos de trabajo aprobada, como se ha dicho, por el Pleno del Tribunal de Cuentas mediante Acuerdo de 30 de mayo de 1989.

El párrafo 1º del artículo 26 de la Ley Orgánica 2/1982, establece que la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance se efectuará por los Delegados Instructores.

La Ley 7/1988, según se ha indicado al comienzo de esta Memoria, recoge, por su parte, en el párrafo 3º de su artículo 11 que en la Sección de Enjuiciamiento existirá una Unidad administrativa, dotada del personal técnico, administrativo y auxiliar necesario, encargada de la tramitación y, en su caso, vigilancia de las actuaciones instructoras previas a la exigencia de responsabilidades contables en los procedimientos de reintegro por alcance.

Examinada la Propuesta de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 6 e) de la Ley 7/1988, el Pleno del Tribunal acordó, en su sesión de 30 de mayo de 1989, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 n) de la citada Ley, aprobar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral al servicio del Tribunal de Cuentas que se adjuntaba como Anexo al citado Acuerdo.

La relación de puestos de trabajo a la que se acaba de aludir contemplaba la existencia de una Unidad de actuaciones previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables, dotada de los siguientes medios personales:

- Una Jefatura encargada de la dirección y coordinación de las actuaciones de la Unidad, así como de la elaboración de informes y propuestas y del apoyo técnico a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento.
- Cuatro Asesores Técnico-Jurídicos para el desempeño de Delegaciones Instructoras, así como para elaboración de informes y propuestas.
- Dos Asesores Económico-Financieros con la función de desempeño de Delegaciones Instructoras, así como de elaboración de informes y propuestas.
- Cuatro ayudantes de asesoría jurídica y económico-financiera encargados de apoyar a los asesores en la práctica de actuaciones.
- El personal administrativo y auxiliar de apoyo a la Unidad.

Durante 1990, la relación de puestos aprobados para la Unidad de Actuaciones Previas sólo fue parcialmente cubierta.

En concreto, durante el referido ejercicio, la Unidad desarrolló sus funciones únicamente con 4 Asesores Técnico-Jurídicos y 2 ayudantes de asesoría técnico-jurídica y económico-financiera, a parte del personal auxiliar y administrativo cuya cobertura fue también, como la del técnico, parcial.

Aun cuando, como se ha explicado, la Unidad de Actuaciones Previas aparece anunciada en la Ley 7/88, de 5 de abril, y creada por el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de mayo de 1989, lo cierto es que su influencia se manifiesta a partir del año 1990 por cuanto los primeros nombramientos de Delegado Instructor a miembros de la Unidad entendidos como tales, en sentido estricto, no se produjeron hasta las Resoluciones de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas de fecha 25 de abril de ese último año.

Hasta la citada fecha, las funciones instructoras vinieron desarrollándose por los Delegados Instructores correspondientes sin que la Unidad hubiera entrado aún en funcionamiento. El tránsito de la organización anterior a la organización nueva, es decir, de la instrucción sin una Unidad Administrativa coordinadora a la instrucción dentro de una Unidad de tales características, no tuvo repercusión alguna en el volumen de tramitación de los expedientes. En efecto, ni la circunstancia que acaba de describirse, ni la escasez de medios personales aludida en párrafos anteriores, impidieron que, durante el ejercicio a que se refiere esta Memoria, los Delegados Instructores desarrollaran un considerable trabajo, tal y como queda acreditado por los datos que aparecen recogidos en el cuadro incorporado a la propia Memoria y, particularmente, por el hecho de haberse practicado 102 liquidaciones durante el mencionado período de tiempo y por el del carácter significativo que tiene el dato del total de procedimientos pendientes a final del ejercicio si se pone en conexión con el del número de incoados a lo largo de dicho año.

La influencia de la entrada en funcionamiento de esta nueva Unidad sobre el desarrollo de las actuaciones previas del art. 47.1 de la Ley 7/1988, podría concretarse en los siguientes aspectos fundamentales:

- Facilitar la coordinación y unificación de criterios, entre los Delegados Instructores, a través del desarrollo de las funciones de dirección encomendadas a la Jefatura de la Unidad.
- Promover la función orientadora de los Letrados encargados de la vigilancia sobre los Delegados Instructores no pertenecientes a la Unidad.
- Habilitar una estructura unificada de control de la situación procedimental de las actuaciones y de registro de la documentación relativa a las mismas.
- Impulsar la configuración de las actuaciones previas del art. 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, como fase procedimental instructora dentro del procedimiento de reintegro por alcance.
- Garantizar el acceso de todos los Delegados Instructores a las modificaciones legales, doctrina jurisprudencial o doctrina científica relevante para la actividad instructora de la Unidad

III.- CUADRO DE DATOS SOBRE EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE ENJUICIAMIENTO

III.1.- SALA DE APELACIÓN

1. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO POR ALCANCE		
1.1	Pendientes al inicio del año . . .	90
1.2	Ingresados durante 1990	29
1.3	Resueltos durante 1990	8

	Sentencias	4	
	Autos	2	
	Providencias: Declarando desierto el recurso	2	
1.4	Pendientes al finalizar el año		111
2. JUICIO DE CUENTAS			
2.1	Pendientes al inicio del año		1
2.2	Ingresados durante 1990		-
2.3	Resueltos durante 1990		-
2.4	Pendientes al finalizar el año		1
3. RECURSOS DEL ART. 48.1 DE LA LEY 7/88			
3.1	Pendientes al inicio del año		12
3.2	Ingresados durante 1990		5
3.3	Resueltos durante 1990		6
	Sentencias	2	
	Autos	1	
	Providencias: Declarando desierto el recurso	2	
	Providencias acordando el desestimiento	1	
3.4	Pendientes al finalizar el año		11
4. RECURSOS DEL ART 54.1 DE LA LEY 7/88			
4.1	Pendientes al inicio del año		4
4.2	Ingresados durante 1990		1
4.3	Resueltos durante 1990		-
4.4	Pendientes al finalizar el año		5
5. RESUMEN			
5.1	Total pendientes al inicio del año		107
5.2	Total ingresados durante 1990		35
	SUMAN		142
5.3	Total resueltos durante 1990		14
5.4	Total pendientes al finalizar el año		128

III.2.- DEPARTAMENTOS DE PRIMERA INSTANCIA

III.2.1.- DEPARTAMENTO 1º (1ª INSTANCIA)

1. ASUNTOS EN ÚNICA INSTANCIA. EXPEDIENTES DE CANCELACIÓN DE FIANZAS		
Pendientes al inicio del año		30
Ingresados durante 1990		21
SUMAN		51
Resueltos durante 1990		42
Pendientes al finalizar el año		9
2. ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA		
2.1. JUICIOS DE CUENTAS		
Pendientes al inicio del año		-
Ingresados durante 1990		-
Resueltos durante 1990		-
Pendientes al finalizar el año		-
2.2. REINTEGROS POR ALCANCE		
Pendientes al inicio del año		15
Ingresados durante 1990		103
SUMAN		118
Resueltos durante 1990		55
Pendientes al finalizar el año		63
2.3. ACCIONES PÚBLICAS		
Pendientes al inicio del año		2
Ingresados durante 1990		3
SUMAN		5
Resueltos durante 1990		1
Pendientes al finalizar el año		4
2.4. ACTUACIONES PREVIAS. ART.46 LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS		
Pendientes al inicio del año		79
Ingresados durante 1990		129
SUMAN		208
Resueltos durante 1990		76
Pendientes al finalizar el año		132
Departamento 1º	113	
Sala de Apelación	29	
2.5. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS		
Pendientes al inicio del año		2
Ingresados durante 1990		9
SUMAN		11
Resueltos durante 1990		7
Pendientes al finalizar el año		4
2.6. RESUMEN		
Total pendientes al inicio del año		128
Total ingresados durante 1990		265
SUMAN		393
Total resueltos durante 1990		181
Total pendientes al finalizar el año		212
Total reintegros obtenidos		43.669.050

III.2.2.- DEPARTAMENTO 2º (1ª INSTANCIA)

1. ASUNTOS EN ÚNICA INSTANCIA. EXPEDIENTES DE CANCELACIÓN DE FIANZAS		
Pendientes al inicio del año		20
Ingresados durante 1990		35
SUMAN		55
Resueltos durante 1990		51
Pendientes al finalizar el año		4
2. ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA		
2.1. JUICIOS DE CUENTAS		
Pendientes al inicio del año		-
Ingresados durante 1990		1
SUMAN		1
Resueltos durante 1990		-
Pendientes al finalizar el año		1
2.2. REINTEGROS POR ALCANCE		
Pendientes al inicio del año		16
Ingresados durante 1990		107
SUMAN		123
Resueltos durante 1990		52
Pendientes al finalizar el año		71
2.3. ACCIONES PÚBLICAS		
Pendientes al inicio del año		-
Ingresados durante 1990		5
SUMAN		5
Resueltos durante 1990		-
Pendientes al finalizar el año		5
2.4. ACTUACIONES PREVIAS. ART.46 LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS		
Pendientes al inicio del año		21
Ingresados durante 1990		172
SUMAN		193
Resueltos durante 1990		36
Pendientes al finalizar el año		157
2.5. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS		
Pendientes al inicio del año		4
Ingresados durante 1990		-
SUMAN		4

Resueltos durante 1990	4
Pendientes al finalizar el año . .	-
Reintegros obtenidos	23.964.545

2.6. RESUMEN

Total pendientes al inicio del año	61
Total ingresados durante 1990 . . .	320
SUMAN	**381**
Total resueltos durante 1990 . . .	143
Total pendientes al finalizar el año	238
Total reintegros obtenidos	23.964.545

III.2.3.- DEPARTAMENTO 3º (1ª INSTANCIA)

1. ASUNTOS EN ÚNICA INSTANCIA. EXPEDIENTES DE CANCELACIÓN DE FIANZAS

Pendientes al inicio del año . . .	30
Ingresados durante 1990	20
SUMAN	**50**
Resueltos durante 1990	39
Pendientes al finalizar el año . .	11

2. ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. JUICIOS DE CUENTAS

Pendientes al inicio del año . . .	-
Ingresados durante 1990	-
Resueltos durante 1990	-
Pendientes al finalizar el año . .	-

2.2. REINTEGROS POR ALCANCE

Pendientes al inicio del año . . .	17
Ingresados durante 1990	81
SUMAN	**98**
Resueltos durante 1990	56
Pendientes al finalizar el año . .	42

2.3. ACCIONES PÚBLICAS

Pendientes al inicio del año . . .	1
Ingresados durante 1990	3
SUMAN	**4**
Resueltos durante 1990	1
Pendientes al finalizar el año . .	3

2.4. ACTUACIONES PREVIAS. ART.46 LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Pendientes al inicio del año . . .	108

(Se incluyen como pendientes 80 asuntos que datan de 1988., fueron objeto de recurso en dicho ejercicio, y devueltos al Departamento a finales de 1990, una vez resueltos aquéllos).

Ingresados durante 1990	130
SUMAN	**238**
Resueltos durante 1990	56
Pendientes al finalizar el año . .	182

(Se incluyen como pendientes 80 asuntos que datan de 1988., fueron objeto de recurso en dicho ejercicio, y devueltos al Departamento a finales de 1990, una vez resueltos aquéllos).

2.5. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Pendientes al inicio del año . . .	-
Ingresados durante 1990	10
Resueltos durante 1990	10
Pendientes al finalizar el año . .	-
Reintegros obtenidos	14.108.841

2.6. RESUMEN

Total pendientes al inicio del año	156
(Ver nota 24)	
Total ingresados durante 1990 . . .	244
SUMAN	**400**
Total resueltos durante 1990 . . .	162
Total pendientes al finalizar el año	238
(Ver nota 24)	
Total reintegros obtenidos	14.108.841

III.2.4.- RESUMEN ASUNTOS 1ª INSTANCIA

Total pendientes al inicio del año	345
Total ingresados durante 1990 . . .	829
SUMAN	**1174**
Total resueltos durante 1990 . . .	486
Total pendientes al finalizar el año	688
Total reintegros obtenidos	81.742.436

III.3.- UNIDAD DE ACTUACIONES PREVIAS

ACTUACIONES PREVIAS DEL ART.47.1 LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

1. Resumen:

Total de instrucciones pendientes al inicio del año	73
Total de instrucciones ingresadas durante 1990	165
SUMAN	**238**
Total de instrucciones terminadas durante el año	99
Total de instrucciones pendientes al terminar el año	139

2. La tramitación de las instrucciones durante el ejercicio dió lugar a la práctica de 701 diligencias de averiguación, de solicitud de información y documentación, de información de bienes y de embargo, 102 actas de liquidación provisional y 33 requerimiento de pago.

ANEXOS

SECTOR PUBLICO ESTATAL

Análisis de la Cuenta General del Estado

I-1.1	Resumen-liquidación de los Presupuestos
I-1.2	Estados agregados liquidación Ppto. Estado y sus OO.AA.
I-1.3.1	Comparación obligaciones reconocidas/derechos por transferencias internas
I-1.3.2	Comparación obligaciones/derechos pendientes de cobro por transferencias internas
I-2.1-1	Liquidación Ppto. Estado. Clasificación económica. Gastos
I-2.1-2	Liquidación Ppto Estado. Clasificación económica. Ingresos
I-2.2	Liquidación Ppto. Estado. Clasificación orgánica
I-2.3	Liquidación Ppto. Estado. Modificaciones de crédito
I-2.4	Detalle obligaciones no reconocidas
I-3.1	Balance diferencial de saldos del estado del ejercicio 1990 respecto a 1989
I-3.2	Composición agrupaciones balance situación
I-4	Compromisos de gasto adquiridos
I-5.1/1	Anticipos de tesorería concedidos en el ejercicio
I-5.1/2	Anticipos de tesorería concedidos en ejercicios anteriores
I-6/1	Cuentas de resultados corrientes del ejercicio y extraordinarios
I-6/2	Cuentas de resultados cartera de valores. Modificación de derechos y obligaciones.
I-7.1	Comparación liquidacion Ppto /Cuenta resultados corrientes del ejercicio
I-7.2	Ridos. corrientes del ejercicio. Salvedades y excepciones
I-8.1	Avales del Tesoro. Situación-resumen (autorizado)
I-8.2	Avales del Tesoro. Situacion-resumen (dispuesto)
I-8.3	Avales del Tesoro Situación-resumen (cancelado)
I-8.4	Avales del Tesoro. Situación-resumen (saldo disponible)
I-9.1-1	Liquidación Ppto OO.AA.AA. Gastos
I-9.1-2	Liquidacion Ppto OO.AA.AA. Ingresos
I-9.2-1	Liquidación Ppto OO.AA.AA. Clasificación económica. Gastos
I-9.2-2	Liquidacion Ppto OO.AA.AA. Clasificación económica. Ingresos
I-10	OO.AA.AA. Balance diferencial de saldos 89/90
I-11	OO.AA.AA. Resultados corrientes del ejercicio
I-12	OO.AA.AA. Estado comparativo cta. ridos /L.P./Balance
I-13.1-1	Resumen Liquidación Ppto. OACIFAs Gastos
I-13.1-2	Resumen Liquidacion Ppto OACIFAs Ingresos
I-13.2-1	Estado agregado liquidación Ppto OACIFAs Gastos
I-13.2-2	Estado agregado liquidacion Ppto OACIFAs Ingresos
I-14	Balance diferencial agregado saldos OACIFAs
I-15.1/2	OACIFAs Resultados corrientes del ejercicio
I-15.2/2	OACIFAs Resultados cartera de valores
I-16	OACIFAs Comparacion cuenta resultados y liquidació presupuestaria
I-17	OO.AA. no incluidos en estados anuales agregados
I-18	OO.AA. no incluidos en estados anuales agregados de ejercicios anteriores

Análisis de las Modificaciones de Crédito

II-1	Modificaciones de credito Clasificacion organico-economica
II-2	Desviaciones Ppto gastos Clasificación organico-económica
II-2.1	Desviaciones ejecucion Presupuesto gastos del Estado Clasificacion económica
II-2.2	Desviaciones ejecucion Presupuesto gastos del Estado Clasificación orgánica.
II-2.3	Desviaciones ejecucion Ppto de gastos de los OO.AA.AA.
II-2.4	Desviaciones ejecucion Ppto de gastos de los OACIFAs
II-3	Desviaciones ejecucion Ppto Clasificación orgánico-económica
II-3.1	Desviaciones ejecución Ppto de ingresos de los OO.AA.AA. Clasificación económica.
II-3.2	Desviaciones ejecucion Ppto de ingresos de los OACIFAs. Clasificación económica.
II-3.1	Desviaciones ejecucion Ppto de ingresos de los OO.AA.AA.
II-3.2	Desviaciones ejecución Ppto de ingresos de los OACIFAs
II-4.1	Desviaciones del Presupuesto por funciones
II-4.2	Obligaciones reconocidas Clasificación económico-funcional
II-5.1	Flujos financieros con la CEE
II-5.2	Liquidación presupuesto del Estado en los conceptos relativos a la CEE.

Sociedades Estatales

IV-1.1	Grupo INI. Estado comparativo balances consolidados 89/90
IV-1.2	Grupo INI. Estado comparativo cuentas resultados consolidadas 89/90
IV-1.3	Grupo INH. Estado comparativo balances consolidados 89/90
IV-1.4	Grupo INH. Estado comparativo cuentas resultados consolidados 89/90

Contratación de la Administración del Estado

V-1	Contratos. Clasificación por su naturaleza y Departamento contratante
V-2	Contratos celebrados. Clasificación por Departamentos y sistemas de adjudicación
V-3	Contratos de obras. Clasificación por Departamentos y sistemas de adjudicación
V-4	Contratos de suministros. Clasificacion por Departamentos y sistemas de adjudicación
V-5	Otros contratos. Clasificación por Departamentos y sistemas de adjudicación
V-6	Resumen de incidencias ocurridas en determinados contratos de la D. G. de Carreteras
V-7	Resumen de incidencias ocurridas en determinados contratos de la D. G. de Obras Hidráulicas

Universidades que permanecen en el ámbito de competencia del estado.

VI-1	Estado de las liquidaciones de los presupuestos de 1990
VI-2	Estado de las liquidaciones de los presupuestos de 1990 (clasificación económica)
VI-3.1	Desviaciones y variaciones interanuales de las obligacioens reconocidas. Ejercicio 1990
VI-3.2	Desviaciones y variaciones interanuales de los derechos reconocidos. Ejercicio 1990
VI-4.1	Balance de situación y cuenta de resultados de la Universidad de Alcalá de Henares
VI-4.2	Balance de situación y cuenta de resultados de la Universidad Autónoma de Madrid
VI-4.3	Balance de situacion y cuenta de resultados de la Universidad de Cantabria
VI-4.4	Balance de situación y cuenta de resultados de la Universidad Carlos III de Madrid
VI-4.5	Balance de situación y cuenta de resultados de la Universidad de Oviedo
VI-4.6	Balance de situacion y cuenta de resultados de la Universidad de Salamanca
VI-4.7	Balance de situacion y cuenta de resultados de la U.N.E.D.
VI-4.8	Balance de situacion y cuenta de resultados de la Universidad de Zaragoza

SEGURIDAD SOCIAL

1	Cuenta liquidación de recursos y aplicaciones del sistema
2	Liquidación gastos y dotaciones del sistema de la Seguridad Social
3	Liquidación de recursos y aplicaciones de EE.GG. y servicio común
4	Liquidación de gastos y dotaciones de EE GG y servicio común
5	Modificaciones de los creditos de presupuesto por funciones y tipos
6	Liquidación presupuesto por grupos de programas
7	Liquidación de gastos y dotaciones del INSS
8	Liquidación de gastos y dotaciones del INSALUD
9	Liquidacion de gastos y presupuestos del INSERSO
10	Liquidación de gastos y dotaciones del I S M
11	Liquidación de gastos y dotaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social
12.1	Balance agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermos profesionales. Activo
12.2	Balance agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermos profesionales. Pasivo
13	Liquidacion de recursos y aplicaciones de mutuas de A.T. y E.P.
14	Liquidacion de gastos y dotaciones de mutuas de A.T. y E.P.
15	Liquidacion de presupuesto de las mutuas de A.T. y E.P. y del sistema
16	Liquidación de presupuesto de las mutuas de A.T. y E.P. en base a la documentación rendida
17	Liquidación de presupuesto con las operaciones presupuestarias de la cuenta de capital
18	Cuenta de gestión de las mutuas de A.T. y E.P. en base a la documentación rendida.
19	Contratos de obras
20	Contratos de servicios
21	Contratos de suministros
22	Resumen de la contratacion administrativa

23	Resumen general de la contratación administrativa de la Seguridad Social
24	Resumen general de la contratación administrativa de la Seguridad Social en 1989

SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

Comunidades Autónomas

I.1.1	Administraciones Públicas. Cuentas integradas de gastos
I.1.2	Administraciones Públicas. Cuentas integradas de ingresos
I-2.1	Liquidación Presupuestos de gastos
I-2.2	Modificaciones presupuestarias de créditos
I-2.3	Obligaciones reconocidas
I-2.4	Liquidación Presupuestos de ingresos
I-2.5	Derechos reconocidos
I-2.6	Presupuestos cerrados acreedores por obligaciones reconocidas
I-2.7	Presupuestos cerrados: deudores por derechos reconocidos
I-2.8	Operaciones extrapresupuestarias. Acreedores
I-2.9	Operaciones extrapresupuestarias Deudores

Corporaciones Locales

II.1	Corporaciones con población inferior a 5 000 habitantes que no han rendido cuentas.
II.3.1	Contratos requeridos a las corporaciones locales indicadas y no recibidos.
II.3.2	Expedientes contractuales examinados en los que se han observado irregularidades. (Obras)
II.3.3	Expedientes contractuales examinados en los que se han observado irregularidades. (Servicios)
II.3.4	Expedientes contractuales examinados en los que se han observado irregularidades. (Suministros)
II.3.5	Expedientes contractuales examinados en los que se han observado irregularidades. (Otros)

FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

FCI-1	Clasificación obligaciones durante el ejercicio 1990
FCI-2	Clasificación por sectores de inversión de las Obligaciones durante 1990.
FCI-3	Junta de construcciones, instalaciones y equipo escolar. Liquidación por Comunidades Autónomas
FCI-4	Junta de construcciones, instalaciones y equipo escolar. Liquidación por Programa de Gasto
FCI-5	Liquidación de los créditos por Comunidades Autónomas
FCI-6	Obligaciones reconocidas por sectores de inversión.

SECTOR PUBLICO ESTATAL

I. Cuenta General del Estado: Regularidad Financiera y Contable

ANEXO I.1.1

EJERCICIO 1990

RESUMEN GENERAL DE LA LIQUIDACION AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS (en pesetas)

GASTOS

SUBSECTORES	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
- ESTADO	12.694.509.023.000	3.172.337.882.742	15.866.846.905.742	13.662.712.254.719
- ORGANISMOS AUT. ADVOS.	1.971.584.772.000	98.842.796.427	2.070.427.568.427	1.852.531.175.164
- ORGANISMOS AUT. C.I.F.A.	811.881.656.000	88.721.293.267	900.602.949.267	802.209.760.038
TOTAL	15.477.975.451.000	3.359.901.972.436	18.837.877.423.436	16.317.453.189.921

INGRESOS

SUBSECTORES	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCIDOS
- ESTADO	10.686.980.000.000	0	10.686.980.000.000	15.003.009.006.496
- ORGANISMOS AUT. ADVOS.	1.971.584.772.000	98.842.796.427	2.070.427.568.427	2.045.131.080.080
- ORGANISMOS AUT. C.I.F.A.	811.881.656.000	88.721.293.267	900.602.949.267	838.993.346.748 (1)
TOTAL	13.470.446.428.000	187.564.089.694	13.658.010.517.694	17.887.133.433.324

RESULTADOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

SUBSECTORES	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES FINALES	RESULTADOS
- ESTADO	(2.007.529.023.000)	(3.172.337.882.742)	(5.179.866.905.742)	1.340.296.751.777
- ORGANISMOS AUT. ADVOS.	0	0	0	192.599.904.916
- ORGANISMOS AUT. C.I.F.A.	0	0	0	36.783.586.710 (1)
TOTAL	(2.007.529.023.000)	(3.172.337.882.742)	(5.179.866.905.742)	1,569.680.243.403

(1) Incluye el Resultado de Operaciones Comerciales realizado.

ANEXO 1-1.2

EJERCICIO 1990

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. CLASIFICACION FUNCIONAL (en pesetas)

GRUPO DE FUNCIONES	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1.- Servicios de Caracter General	291.523.136.000	13.166.570.773	304.689.706.773	274.759.710.171
2.- Defensa, Proteccion Civil y Seg. Ciudadana	1.261.110.286.000	95.067.681.601	1.356.177.967.601	1.186.730.941.367
3.- Seguridad, Proteccion y Promocion Social	2.428.565.935.000	36.006.314.787	2.464.572.249.787	2.342.871.582.826
4.- Produccion de Bienes Publicos de caracter Social	1.063.668.240.000	72.561.896.326	1.136.230.136.326	1.063.219.633.104
5.- Produccion de Bienes Publicos de caracter Econ.	1.512.478.348.000	143.776.852.500	1.656.255.200.500	1.500.703.701.632
6.- Regulación Economica de caracter general	647.575.219.000	53.272.032.966	700.847.251.966	487.753.885.817
7.- Regulación Economica de Sectores Productivos	641.649.500.000	111.336.481.662	752.985.981.662	672.465.656.969
8.- Transferencias entre subsect.(excluidas internas Estado-OOAA)	1.627.531.801.000	150.724.102.872	1.778.255.903.872	1.764.102.715.451
9.- Transferencia al Sector Publico Territorial	2.391.965.107.000	190.792.704.729	2.582.757.811.729	2.425.061.959.066
0.- Deuda Publica	2.394.435.585.000	2.439.493.785.841	4.833.929.370.841	3.365.865.856.752
TOTAL	14.260.503.157.000	3.306.198.424.057	17.566.701.581.057	15.083.535.643.155
Transferencias internas Estado-OOAA	1.217.472.294.000	53.703.548.379	1.271.175.842.379	1.233.917.546.766
TOTAL AGREGADO	15.477.975.451.000	3.359.901.972.436	18.837.877.423.436	16.317.453.189.921

ANEXO I-1.3.1
EJERCICIO 1990

ESTADO COMPARATIVO ENTRE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LOS CORRELATIVOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LOS SUBSECTORES INTEGRADOS EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO (en pesetas)

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR DERECHOS RECONOCIDOS POR	ESTADO	ORGANISMO AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS (OAA)	ORGANISMO AUTÓNOMOS COM IND Y FIN (OACIFS)	ESTADO	ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (OAA)	ORGANISMOS AUTÓNOMOS COM IND Y FIN (OACIFS)	
ESTADO	( )	11 555 375 867 (889 314 100) 12 444 689 967	180 730 775 685 (4 268 854 940) 176 471 920 745	( )	(109 969 381)	43 000 000 000 (2 340 423) 43 002 340 423	235.296.151.552 (3.267.231.036) 232.028.920.516
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	587 994 767 415 (1 549 619 202) 589 544 386 617	(-15 498 000) 15 498 000	325 769 822 (10 504 235) 315.265.587	197 287 362 274 (-4.814.724.712) 202.102.086.986	300 000 000 ( ) 300 000 000	( )	785.907.899.511 (-6.369.337.679) 792.277.237.190
ORGANISMOS AUTÓNOMOS COM IND Y FIN	81.963.747.755 (-614.742.710) 82 578 490 465	30.000.000 (-42.697.265) 72 697.265	14 812 524.116 (5.859.935) 14 806 664 181	57.742.346.411 (-499.961.941) 58.242 308.352	( )	8.924.865.000 (-82.000.000) 9 006 865 000	163.473.483.282 (-1.233.541.981) 164.707.025.263
TOTAL	669 958 515 170 (2 164 361 912) 672 122 877.082	11.585.375 867 (-947.509.365) 12.532 885.232	195 879 069.623 (4.285.219.110) 191.593 850.513	255 029 708.685 (-5.314 686.653) 260 344 395.338	300 000 000 (-109.969 381) 409.969 381	51.924 865.000 (-84.340.423) 52 009.205.423	1.184.677.534.345 (-4.335.648.624) 1.189.013.182.969

ANEXO I-1.3.2
EJERCICIO 1990

ESTADO COMPARATIVO ENTRE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y LOS CORRELATIVOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN 31/12/90 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LOS SUBSECTORES INTEGRADOS EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO (en pesetas)

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			TOTAL
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO POR DERECHOS PENDIENTES DE COBRO POR	ESTADO	ORGANISMO AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS (OAA)	ORGANISMO AUTÓNOMOS COM.IND. Y FIN (OACIFS)	ESTADO	ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (OAA)	ORGANISMOS AUTÓNOMOS COM.IND. Y FIN. (OACIFS)	
ESTADO	( )	19 950 050 (19 950 050)	1 602 769 492 (1 602 769 492)	( )	50 000 000 000 (50 000 000 000)	( )	51.622.719.542 (51 622.719.542)
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	26 418 926 317 (355 975 365) 26 774 901 682	8 789 187 (8 789 187)	8 481 867 (31 482 879) 39 964 746	93 321 310 110 (5.409 269 607) 98.730 579 717	( )	( )	119.757.507.481 (5 787.938.664) 125 545 446.145
ORGANISMOS AUTÓNOMOS COM. IND. Y FIN	59 009 717 350 (1.150 208 943) 60 159 926 293	30 000 000 ( ) 30 000 000	400 879.344 (54 778 056) 455 657 400	28 785 071 294 (211.723 551) 28 996 794 845	( )	1 883 707 500 (90 204 000) 1 973 911 500	90.109.375.488 (1.506.914.550) 91.616.290.038
TOTAL	85 428 643 667 (1 506 184 308) 86 934 827 975	58 739 237 (28.739 237) 30 000 000	2 012 130 703 (1 516 508 557) 495 622 146	122 106 381 404 (5 620.993 158) 127 727.374 562	50 000 000 000 (50 000 000 000)	1 883 707 500 (90 204 000) 1 973 911 500	261.489.602.511 (44.327.866.328) 217 161.736.183

ANEXO I-2.1-1

EJERCICIO 1990

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO. CLASIFICACION ECONOMICA (en pesetas)

GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.129.995.514.000	76.234.943.744	2.206.230.457.744	2.153.810.655.144
2.- GASTOS BIENES CTES. Y SERVICIOS	332.156.060.000	57.075.473.481	389.231.533.481	336.303.741.017
3.- GASTOS FINANCIEROS	1.454.204.839.000	96.745.712.624	1.550.950.551.624	1.473.349.638.059
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.435.592.313.000	212.816.860.423	5.648.409.173.423	5.542.665.865.281
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.351.948.726.000	442.872.990.272	9.794.821.716.272	9.506.129.899.501
6.- INVERSIONES REALES	1.049.209.532.000	126.988.301.151	1.176.197.833.151	944.431.759.562
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.017.294.604.000	223.845.748.867	1.241.140.352.867	1.091.215.931.841
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.066.504.136.000	350.834.050.018	2.417.338.186.018	2.035.647.691.403
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.418.452.862.000	793.707.040.290	12.212.159.902.290	11.541.777.590.904
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	313.551.336.000	14.608.936.495	328.160.272.495	185.683.061.697
9.- PASIVOS FINANCIEROS	962.504.825.000	2.364.021.905.957	3.326.526.730.957	1.935.251.602.118
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.276.056.161.000	2.378.630.842.452	3.654.687.003.452	2.120.934.663.815
TOTAL	12.694.509.023.000	3.172.337.882.742	15.866.846.905.742	13.662.712.254.719

ANEXO I-2.1-2

EJERCICIO 1990

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO. CLASIFICACION ECONOMICA (en pesetas)

INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCIDOS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	4.880.000.000.000		4.880.000.000.000	5.137.372.250.023
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	4.413.000.000.000		4.413.000.000.000	4.075.684.917.528
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	357.000.000.000		357.000.000.000	320.394.312.183
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	456.259.500.000		456.259.500.000	359.689.722.947
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	289.340.500.000		289.340.500.000	321.092.331.933
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.395.600.000.000	0	10.395.600.000.000	10.214.233.534.614
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	30.000.000.000		30.000.000.000	30.795.829.061
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.400.000.000		136.400.000.000	143.028.563.648
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	166.400.000.000	0	166.400.000.000	173.824.392.709
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.562.000.000.000	0	10.562.000.000.000	10.388.057.927.323
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	124.980.000.000		124.980.000.000	23.543.816.045
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0		0	4.591.407.263.128
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	124.980.000.000	0	124.980.000.000	4.614.951.079.173
TOTAL	10.686.980.000.000	0	10.686.980.000.000	15.003.009.006.496

ANEXO I-2.2

EJERCICIO 1990

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO. CLASIFICACION ORGANICA (en pesetas)

GASTOS

SECCIONES PRESUPUESTARIAS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
01.- CASA DE SU MAJESTAD EL REY	795.000.000	5.946.793	800.946.793	800.946.793
02.- CORTES GENERALES	12.817.664.000	0	12.817.664.000	12.817.664.000
03.- TRIBUNAL DE CUENTAS	2.720.588.000	33.889.537	2.754.477.537	2.470.943.266
04.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.120.716.000	25.732.011	1.146.448.011	1.000.270.628
05.- CONSEJO DE ESTADO	565.635.000	44.669.874	610.304.874	540.265.772
06.- DEUDA PUBLICA	2.364.682.673.000	2.439.493.785.841	4.804.176.458.841	3.336.116.702.155
07.- CLASES PASIVAS	543.261.000.000	19.575.052.000	562.836.052.000	550.965.293.743
08.- CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	1.532.562.000	0	1.532.562.000	1.332.732.389
12.- MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES	72.381.489.000	2.899.358.753	75.280.847.753	69.510.600.223
13.- MINISTERIO DE JUSTICIA	191.076.028.000	7.915.731.746	198.991.759.746	181.350.245.842
14.- MINISTERIO DE DEFENSA	870.433.519.000	80.302.655.376	950.736.174.376	819.751.030.542
15.- MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	404.162.456.000	52.467.894.834	456.630.350.834	394.521.281.477
16.- MINISTERIO DEL INTERIOR	431.090.810.000	22.569.643.340	453.660.453.340	429.944.098.788
17.- MINIST.OBRAS PUBLICAS Y URBAN.	626.835.106.000	54.050.231.479	680.885.337.479	615.045.350.471
18.- MINISTERIO EDUCACION Y CIENCIA	975.683.358.000	19.210.449.300	994.893.807.300	987.766.120.111
19.- MINISTERIO TRABAJO Y SEG.SOC.	1.012.487.893.000	31.085.347.000	1.043.573.240.000	1.027.075.183.203
20.- MINISTERIO INDUSTRIA Y ENERGIA	202.240.775.000	14.660.652.960	216.901.427.960	200.007.026.380
21.- MINIST.AGRICULTURA, P.Y ALIM.	198.215.219.000	57.705.601.206	255.920.820.206	247.478.739.494
22.- MINISTERIO ADMINISTRAC.PUBLIC.	36.089.586.000	16.165.703.512	52.255.289.512	39.543.981.026
23.- MINIST.TRANSPORT.TURISMO Y COM.	594.551.172.000	56.440.119.857	650.991.291.857	606.911.840.218
24.- MINISTERIO DE CULTURA	50.153.359.000	10.587.564.386	60.740.923.386	56.041.105.372
25.- MINIST.RELAC.CORTES Y SEC.GOB.	21.950.592.000	1.450.256.665	23.400.848.665	19.846.871.838
26.- MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO	1.311.089.919.000	118.989.218.252	1.430.079.137.252	1.424.638.013.424
27.- MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES	37.198.923.000	534.292.747	37.733.215.747	34.696.504.122
28.- MINISTERIO PORTAVOZ DEL GOBIERNO	1.824.021.000	83.175.380	1.907.196.380	1.733.663.399
31.- GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	286.729.259.000	(10.035.784.408)	276.693.474.592	139.468.563.446
32.- ENTES TERRITORIALES	1.819.364.401.000	54.126.025.796	1.873.490.426.796	1.859.062.981.077
33.- FONDO COMPENSACION INTERTERRIT.	239.802.300.000	121.950.668.505	361.752.968.505	269.620.012.838
34.- RELACIONES FINANCIERAS CON C.E.E.	383.653.000.000	0	383.653.000.000	332.654.222.682
T O T A L E S T A D O	12.694.509.023.000	3.172.337.882.742	15.866.846.905.742	13.662.712.254.719

ANEXO I-2.3

EJERCICIO 1990

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO. DETALLE DE LAS MODIFICACIONES DE CREDITO (en pesetas).

CAPITULOS	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	AUMENTO EN CREDITOS AMPLIABLES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	INCORPORACIONES REMANENTES CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	AUMENTOS POR RECTIFICACION	BAJAS POR ANULACION	TOTAL MODIFICACIONES
1.- GASTOS DE PERSONAL	51.827.212.148	0	24.433.870.728	(9.899.825.159)	1.902.830.630	8.025.750.231	0	54.894.834	76.234.943.744
2.- GASTOS BIENES CTES. Y SERVICIOS	0	0	3.263.144.786	15.636.601.733	21.831.913.906	16.348.320.607	0	4.507.551	57.075.473.481
3.- GASTOS FINANCIEROS	0	0	96.407.513.733	12.814.369	0	325.384.522	0	0	96.745.712.624
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.345.602.142	0	215.773.904.050	(41.795.137.725)	29.390.468.375	1.102.623.581	0	0	212.816.860.423
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.172.814.290	0	339.878.433.297	(36.045.546.782)	53.125.212.911	25.801.478.941	0	59.402.385	442.872.990.272
6.- INVERSIONES REALES	0	0	229.554.042	(3.096.005.625)	100.977.575.957	28.877.176.777	0	0	126.988.301.151
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.044.100.000	0	12.052.726.570	39.159.542.807	153.412.995.140	7.176.384.350	0	0	223.845.748.867
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.044.100.000	0	12.282.280.612	36.063.537.182	254.390.571.097	36.053.561.127	0	0	350.834.050.018
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.216.914.290	0	352.160.713.909	17.990.400	307.515.784.008	61.855.040.068	0	59.402.385	793.707.040.290
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	(17.990.400)	14.349.559.836	277.367.059	0	0	14.608.936.495
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0	0	2.343.092.805.957	0	20.929.100.000	0	0	0	2.364.021.905.957
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	2.343.092.805.957	(17.990.400)	35.278.659.836	277.367.059	0	0	2.378.630.842.452
TOTAL	72.216.914.290	0	2.695.253.519.866	0	342.794.443.844	62.132.407.127	0	59.402.385	3.172.337.882.742

ANEXO I-2.4
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OTRAS OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS (Apartado I.2.1.1.A.15)

(en millones de pesetas)

SECCION	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	TOTAL
07 CLASES PASIVAS	416						416
12 EXTERIORES		2			4		6
13 JUSTICIA	647	396		1	577		1.621
14 DEFENSA	187	489		3	22.672		23.351
15 ECONOMIA	1.300	634		311	1.304	3.654	7.203
16 INTERIOR	103	848		42	1.512		2.505
17 OBRAS PUBLICAS	299	27	25		27.015	831	28.197
19 TRABAJO	184	37		18.851	6		19.078
20 INDUSTRIA	48	52		514	500	2.433	3.547
21 AGRICULTURA	45	30			284	256	615
23 TRANSPORTES	925	3.063			5.730	2.020	11.738
24 CULTURA	36				474		510
25 RELAC. CORTES	5	151			518		674
31 DIVERSOS Mº					622		622
TOTAL	4.195	5.729	25	19.722	61.218	9.194	100.083

BALANCE DIFERENCIAL DE SALDOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1990 RESPECTO AL EJERCICIO 1989

(en pesetas)

* ACTIVO *

CONCEPTOS	1/1/90	31/12/90	VARIACIONES
INMOVILIZADO MATERIAL			
- Terrrenos y bienes naturales	204.102.680.213	207.795.009.132	3.692.328.919
- Edificios y otras construcciones	294.802.872.774	371.412.147.720	76.609.274.946
- Maquinaria, instal. y utillaje	768.013.426.292	784.662.527.861	16.649.101.569
- Material de transporte	54.058.006.565	61.183.468.542	7.125.461.977
- Mobiliario y enseres	16.593.916.995	27.246.813.513	10.652.896.518
- Equipos procesos de información	80.787.947.522	96.929.493.288	16.141.545.766
- Metales preciosos	21.234.161.770	--	(21.234.161.770)
- Otro inmovilizado material	135.375.842.391	141.146.518.641	5.770.676.250
INVERSIONES PÚBLICAS			
- Infraestruc. y bienes uso gral.	4.170.778.202.633	4.713.159.994.338	542.381.791.705
- Inversiones militares		224.984.747.524	224.984.747.524
INMOVILIZADO INMATERIAL			
- Concesiones administrativas	--	552.789.792	552.789.792
- Propiedad Industrial	82.778.776.226	83.352.896.031	574.119.805
- Fondo de Comercio	--	37.865.439	37.865.439
- Derecho de Traspaso	--	408.321.862	408.321.862
- Propiedad intelectual	7.852.851.220	8.038.808.517	185.957.297
- Otro Inmovilizado Inmaterial	19.442.894	15.408.045.465	15.388.602.571
INMOVILIZADO FINANCIERO			
- Acciones con cotiz. Oficial	283.540.520.953	203.681.576.938	(79.858.944.015)
- Acciones sin cotiz. Oficial	57.636.331.423	110.356.780.540	52.720.449.117
- Oblig. Bonos e inv.renta Fija	--	1.474.614.000	1.474.614.000
- menos desemb.ptes.s/accion.y p.	--	(622.500.000)	(622.500.000)
- Préstamos	1.359.443.791.702	1.510.628.275.656	151.184.483.954
- Instituto Crédito Oficial	967.425.571.183	1.004.636.684.832	37.211.113.649
- Finanzas a largo y medio plazo	80.557.915	80.797.583	239.668
GASTOS A CANCELAR			
- Gastos amortizables	1.920.000	1.920.000	--
- Aportac. Estado Deud. asumidas	587.732.245.939	604.171.365.919	16.439.119.980
DEUDORES			
- Deudores por Dchos. reconocidos	817.763.227.965	907.851.424.796	90.088.196.831
- D.D.R.Recursos otros Entes Públ.	42.600.842.801	46.804.120.774	4.203.277.973
- Entes Públicos Dev.Ing.Ptes.pago	1.453.625.520	62.860.212	(1.390.765.308)
- Entes Públicos, c/c. efectivo	8.564.407.356	(2.674.178.229)	(11.238.585.585)
- Otros deudor. no presupuestarios	143.309.308.077	303.069.047.274	159.759.739.197
SUMA Y SIGUE :	10.105.950.478.329	11.425.842.237.960	1.319.891.759.631

* PASIVO *

CONCEPTOS	1/1/90	31/12/90	VARIACIONES
PATRIMONIO Y RESERVAS			
- Plusvalía revalor. activos	(1.135.323.867)	--	1.135.323.867
- Resultados ptes. aplicación	(6.961.302.172.902)	(7.415.634.705.047)	(454.332.532.145)
SUBVENCIONES DE CAPITAL			
- Subvenc. capital recibidas	775.218.619.660	918.247.183.308	143.028.563.648
DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO			
- Moneda metálica emitida	250.008.725.135	265.475.399.744	15.466.674.609
- Empréstitos	4.832.460.816.000	5.389.636.468.039	557.175.652.039
- Préstamos recibidos	1.008.997.664.232	2.307.973.258.015	1.298.975.593.783
- Préstamos asumidos	273.863.365.939	302.160.572.880	28.297.206.941
DEUDAS A CORTO PLAZO			
- Acreedor oblig. reconocidas	1.569.284.919.721	2.087.817.151.514	518.532.231.793
- Acreedor pagos ordenados	138.398.267.859	97.330.174.845	(41.068.093.014)
- Acreedor por dev. Ing. Pptos.	7.852.722.839	9.962.506.923	2.109.784.084
- Acreed. Dev. Ing. Rec. otros Ent.	1.453.625.520	62.860.212	(1.390.765.308)
- Entes Púb. por Der. a cobrar	42.600.842.801	46.804.120.774	4.203.277.973
- Entes Púb. Ing. ptes. liq.	40.420.578.205	8.248.994.932	(32.171.583.273)
- Seguridad Social acreedora	928.322.026	1.536.827.862	608.505.836
- Prést. corto plaz. fuera S.P.	8.956.636.616.290	9.930.681.097.285	974.044.480.995
- Otros acreed. no presupuest.	142.406.618.426	161.942.189.547	19.535.571.121
PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN			
- Antic. Bº España ptes. formalizar	(407.073.278.026)	(274.896.049.623)	132.177.228.403
- Ingresos ptes. aplicación	35.268.373.940	32.836.741.963	(2.431.631.977)
- Caja Gral. Dep. Otras Operac.	209.110.465	230.510.907	21.400.442
- Operaciones en camino	46.166.475.701	48.109.444.666	1.942.968.965
SUMA Y SIGUE :	10.752.664.889.964	13.918.524.748.746	3.165.859.858.782

ANEXO I.3.1/2
1990

BALANCE DIFERENCIAL DE SALDOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1990 RESPECTO AL EJERCICIO 1989 (en pesetas) (Continua

* ACTIVO *				* PASIVO *			
CONCEPTOS	1/1/90	31/12/90	VARIACIONES	CONCEPTOS	1/1/90	31/12/90	VARIACIONES
SUMA ANTERIOR :	10.105.950.478.329	11.425.842.237.960	1.319.891.759.631	SUMA ANTERIOR :	10.752.664.889.964	13.918.524.748.746	3.165.859.858.782
CUENTAS FINANCIERAS							
- Fondos Públicos	700.000	700.000	--				
- Préstamos conc. a corto plazo	1.921.024	--	(1.921.024)				
- Caja	185.919	264.947	79.028				
- Bancos e Instituc. crédito	(278.135.604.008)	968.540.410.428	1.246.676.014.436				
PARTIDAS PTES. APLICACIÓN							
- Entregas en ejecuc. operac.	83.526.123.531	66.358.446.738	(17.167.676.793)				
- Otras partidas ptes. aplicación	386.951.232.024	808.899.546.189	421.948.314.165				
MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERÍA							
- Movimientos int. Tesorería	701.000	701.000	--				
SITUACIONES TRANSIT.FINANCIA							
- Deuda emitida por Conv.Pte.	36.620.000	36.620.000	--				
RESULTADOS							
- Resultados ejerc. (Pérdidas)	454.332.532.145	648.845.821.484	194.513.289.339				
TOTAL ACTIVO	10.752.664.889.964	13.918.524.748.746	3.165.859.858.782	TOTAL PASIVO	10.752.664.889.964	13.918.524.748.746	3.165.859.858.782
CUENTAS CONTROL PRESUPUESTA				CUENTAS CONTROL PRESUPUEST.			
- Ppto. gastos ejerc. posteriores	627.131.666.223	1.055.504.725.692	428.373.059.469	- Gastos comprometidos ej. post.	627.131.666.223	1.055.504.725 692	428.373.059.469
- Anticipos Tesorería concedidos	332.031.085.003	310.235.190.821	(21.795.894.182)	- Créditos anticipados	23.585.833.160	23.576.563.791	(9.269.369)
				- Gastos comprometidos	308.445.251.843	286.658.627.030	(21.786.624.813)
CUENTAS DE ORDEN							
- Avales y garantías	243.098.057.071	202.905.923.044	(40.192.134.027)	CUENTAS DE ORDEN			
- Valores en depósito	945.059.815.979	1.164.535.254.775	219.475.438.796	- Avales y garantías	243.098.057.071	202.905.923.044	(40.192.134.027)
- De control de recibos valores	142.017.224.000	141.874.397.000	(142.827.000)	- Valores en depósito	945.059.815.979	1.164.535.254.775	219.475.438.796
- De control títulos y cupón. D.P.	519.251.491.403	238.928.528.181	(280.322.963.222)	- De control de recibos valores	142.017.224.000	141.874.397.000	(142.827.000)
				- De control títulos y cup. D.Públ.	519.251.491.403	238.928.528.181	(280.322.963.222)
TOTAL	13.561.254.229.643	17.032.508.768.259	3.471.254.538.616	TOTAL	13.561.254.229.643	17.032.508.768.259	3.471.254.538.616

ANEXO I-3.2
1990

COMPOSICIÓN DE ALGUNAS AGRUPACIONES DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL ESTADO A 31/12/90
(en pesetas)

A) DETALLE DE BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Código Cta.	DENOMINACIÓN	D (A) SALDO
571	BANCO DE ESPAÑA c/c A LA VISTA	
571.0	B.E. c/c Tesoro Público	1.220.980.046.318
571.1	B.E. c/c Caja General de Depósitos	26.656.549.908
572	BANCO DE ESPAÑA. OTRAS CUENTAS	
572.2	Cuenta moneda metálica en caja	(3.551.337.563)
572.7	Cuenta Ser. Financiero de la Deuda. Anticipos	(252.236.348.104)
572.8	Cuenta de operaciones con el exterior	(22.659.701.519)
572.9	Cuenta de moneda metálica recogida	(648.798.612)
	TOTAL "BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO"	**968.540.410.428**

B) DETALLE DE DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Código Cta.	DENOMINACIÓN	SALDO
120	Moneda metálica aplicada a Presupuesto	147.774.863.825
121	Moneda metálica emitida ingresada en el Tesoro pendiente de aplicar a presupuesto	117.700.535.919
	TOTAL "MONEDA METÁLICA EMITIDA"	**265.475.399.744**
150	Deuda Perpetua Interior	10.700.252.000
151	Deuda Perpetua Exterior	26.245.000
152.0	Deuda del Estado	5.074.917.098.000
152.2	Cédulas para inversiones	1.982.080.000
152.3	Deudas asumidas por el Estado	302.010.793.039
	TOTAL "EMPRÉSTITOS"	**5.389.636.468.039**
160.1	Préstamos recibidos del Banco de España	1.708.326.267.517
170	Préstamos a m. y l. plazo del interior	4.481.294.639
171	Préstamos a m. y l. plazo del exterior	595.165.695.859
	TOTAL "PRÉSTAMOS RECIBIDOS A MEDIO Y LARGO PLAZO"	**2.307.973.258.015**
162	Préstamos asumidos por Estado m. y l. plazo	202.512.099.986
172	Préstamos m. y l. plazo asumidos del Interior	60.838.534.675
173	Préstamos m. y l. plazo asumidos del Exterior	38.809.938.219
	TOTAL "PRÉSTAMOS ASUMIDOS A MEDIO Y LARGO PLAZO"	**302.160.572.880**

ANEXO I-4
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

	1990	1991	1992	1993 y SIGUIENTES	TOTAL
CAPITULO 1º	26.663.110	--	--	--	26.663.110
CAPITULO 2º	6.438.057.820	1.291.860.343	69.404.617	22.929.775	7.822.252.555
CAPITULO 6º	576.974.160.072	318.212.022.545	54.575.395.078	9.458.318.112	959.219.895.807
CAPITULO 7º	38.443.171.113	25.144.333.404	3.889.486.606	4.979.788.422	72.456.779.545
CAPITULO 8º	4.957.900.046	3.292.831.717	2.587.212.690	5.141.190.222	15.979.134.675
TOTAL	626.839.952.161	347.941.048.009	61.121.498.991	19.602.226.531	1.055.504.725.692

ANEXO I-5.1/1
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE LA EVOLUCION Y SITUACION DE LOS ANTICIPOS DE TESORERIA CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO (en pesetas)	
	IMPORTE
A) CREDITOS	
- Anticipos concedidos en el ejercicio	3.459.100.628
- Anticipos cancelados en el ejercicio	3.044.100.000
- Anticipos pendientes de cancelar en fin de ejercicio	415.000.628
B) OBLIGACIONES	
- Obligaciones reconocidas en el ejercicio	3.459.100.628
- Obligaciones canceladas en el ejercicio	3.044.100.000
- Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto en fin de ejercicio	415.000.628
C) PAGOS ORDENADOS	
- Pagos ordenados directos	3.044.100.000
- Pagos ordenados inversos	--
- Pagos directos pendientes de ordenar	415.000.628
- Pagos inversos pendientes de ordenar	3.044.100.000
D) PAGOS REALIZADOS	
- Pagos realizados directos	3.044.100.000
- Pagos realizados inversos	--
- Libramientos directos pendientes de pago	--
- Libramientos inversos pendientes de pago	--

ANEXO I-5.1/2
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE LA EVOLUCION Y SITUACION DE LOS ANTICIPOS DE TESORERIA CONCEDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (en pesetas).

	Mª DE DEFENSA	OTRAS SECCIONES	TOTAL
A) CREDITOS			
- Anticipos pendientes de cancelar 1/1	310.858.270.713	21.172.814.290	332.031.085.003
- Anticipos cancelados	1.038.080.520	21.172.814.290	22.210.894.810
- Anticipos pendientes de cancelar 31/12	309.820.190.193	0	309.820.190.193
B) OBLIGACIONES			
- Obligaciones pendientes de cancelar 1/1	287.279.818.158	21.164.048.169	308.443.866.327
- Obligaciones reconocidas en el ejercicio	1.888.764	7.165.930	9.054.694
- obligaciones canceladas en el ejercicio	1.038.080.520	21.171.214.099	22.209.294.619
- Obligaciones pendientes de cancelar 31/12	286.243.626.402	0	286.243.626.402
C) PAGOS ORDENADOS			
- Pagos directos pendientes de ordenar 1/1	--	--	--
- Pagos inversos pendientes de ordenar 1/1	--	--	--
- Pagos ordenados directos	--	7.165.930	7.165.930
- Pagos ordenados inversos	241.322.802	1.990.918.597	2.232.241.399
- Pagos directos pendientes de ordenar 31/12	1.888.764	--	1.888.764
- Pagos inversos pendientes de ordenar 31/12	796.757.718	19.180.295.502	19.977.053.220
D) PAGOS REALIZADOS			
- Libramientos directos pendientes de pago 1/1	11.510.100	129.155	11.639.255
- Libramientos inversos pendientes de pago 1/1	--	--	--
- Pagos directos realizados	11.510.000	6.333.084	17.843.084
- Pagos inversos realizados	241.322.802	1.990.918.597	2.232.241.399
- Libramientos directos pendientes pago 31/12	--	962.001	962.001
- Libramientos inversos pendientes pago 31/12	--	--	--

ANEXO I-6/1
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

CUENTAS DE RESULTADOS (en pesetas)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

DEBE		HABER	
Gastos de personal	1.739.760.585.303	Ventas	96.554.834.678
Gastos financieros	1.477.780.191.703	Renta de la Propiedad y de la empresa	436.888.741.552
Tributos	321.649.209	Tributos ligados a la prod. e import.	4.151.647.194.085
Trabajos, sumin. y serv. exteriores	290.768.131.471	Impues.ctes.sobre la renta y el patrim.	5.059.882.592.504
Prestaciones sociales	455.393.457.846	Cotizaciones sociales	61.591.105.339
Subvenciones de explotación	503.932.726.089	Transferencias corrientes	359.689.722.947
Transferencias corrientes	5.030.466.949.957	Impuestos sobre el capital	14.792.197.740
Transferencias de capital	1.190.406.423.712	Otros ingresos	59.999.003.111
		SALDO DEUDOR	447.784.723.334
TOTAL	10.688.830.115.290	TOTAL	10.688.830.115.290

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

DEBE		HABER	
De deuda pública	35.445.596.246	Resultados positivos en la enajenación del inmovilizado. Metales preciosos	6.664.108.231
Minusvalía metales preciosos	1.135.323.867	Resultados positivos en la enajenación del inmovilizado material	1.873.786.384
Devol. ingresos anticipos a funcionarios	428.241	Por reintegros anticipos a funcionarios	527.440.902
Por exención de la obligación de reembolsos de prést. sujetos a condición	19.956.491	Resultados posit. en la enaj. de acciones no incluidas en inventario 1-1-1990	30.754.285
Prestamos concedidos a corto plazo a funcionarios	241.072.692	Por reembolso e incorporación de prestamos	1.764.642.164
Prestamos concedidos a medio y largo plazo a funcionarios	521.120.883		
Obligaciones reconocidas para el pago de los justiprecios Ley 7/1.983 de 29 junio	53.732.415		
Regularización entrada en vigor instrucción cartera de valores	70.037.223.880		
		SALDO DEUDOR	96.593.722.749
TOTAL	107.454.454.715	TOTAL	107.454.454.715

ANEXO I-6/2
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

CUENTAS DE RESULTADOS (en pesetas)

RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES

DEBE		HABER	
Resultados negativos en la enajenación de acciones	20.978.907.056		
		SALDO DEUDOR	20.978.907.056
	20.978.907.056		20.978.907.056

MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEBE		HABER	
Por las devoluciones reconocidas de ejercicios anteriores	374.095.943	Por rehabilitación de deudas	68.089.768
Por la disminución del saldo de derechos reconocidos	91.712.591.886	Por el aumento del saldo de derechos reconocidos	1.314.325.795
Por devoluciones e insolvencias de órdenes de cobro	744.133	Por las obligaciones anuladas	7.989.328.367
Por aumento del saldo de obligaciones	772.780.313		
		SALDO DEUDOR	83.488.468.345
TOTAL	92.860.212.275	TOTAL	92.860.212.275

RESULTADOS DEL EJERCICIO

DEBE		HABER	
Resultados corrientes del ejercicio	447.784.723.334		
Resultados extraordinarios	96.593.722.749		
Resultados de la cartera de valores	20.978.907.056		
Modificación de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores	83.488.468.345		
		PERDIDA NETA TOTAL	648.845.821.484
TOTAL	648.845.821.484	TOTAL	648.845.821.484

ANEXO I-7.1
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

COMPARACION Y CONCILIACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y DE LA CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO. (EN MILLONES DE PESETAS).	
INGRESOS[1]	
DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS NETOS	10.214.233
SUMA DEL "HABER" DE LA CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	10.241.045
DIFERENCIA	(26.812)
CAUSAS DE LA DIFERENCIA	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS DIFERENCIA ENTRE M/P EXPEDIDOS Y SATISFECHOS	1.736
- DIFERENCIAS DE CAMBIO	(28.561)
- OTRAS	13
	(26.812)
GASTOS[2]	
PRESUPUESTO ORDINARIO DEL ESTADO	10.597.346
ANTICIPOS DE TESORERIA	(20.749)
SUMA	10.576.597
SUMA DEL "DEBE" DE LA CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	10.688.830
DIFERENCIA	(112.233)
CAUSAS DE LA DIFERENCIA	
AMORTIZACION DE DEUDAS ASUMIDAS	(107.790)
DIFERENCIAS DE CAMBIO	(4.431)
OTRAS	(12)
	(112.233)

[1] Capítulos 1 al 5

[2] Capítulos 1 al 4, y 7

ANEXO I-7.2
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

REPERCUSION DE LAS SALVEDADES Y EXCEPCIONES CONTENIDAS EN EL DICTAMEN
(en millones de pesetas)

CONCEPTO	RTDOS.CTES. AUMENTO (DISMINUCION)	RTDOS.EJ.ANT. AUMENTO (DISMINUCION)	TOTAL	APARTADO INFORME
Anticipos del Banco de España	(7.001)	143.053	136.052	I.2.1.1.A.1)
Transferencias al Crédito Oficial	19.909	108.841	128.750	I.2.1.1.A.4)
Relaciones Financieras con la C.E.E.	59.225	16.786	76.011	I.2.1.1.A.5)
Cuotas Sociales	148	59.736	59.884	I.2.1.1.A.6)
Serv. CAMPSA y RENFE Mº Defensa	(1.208)	3.115	1.907	I.2.1.1.A.7)
Oblig. D.G.Correos y Telégrafos	20.092	36.511	56.603	I.2.1.1.A.8)
Subvenciones Tráfico aéreo	2.537	9.052	11.589	I.2.1.1.A.9)
Deuda asumida a Tabacalera	-	21.461	21.461	I.2.1.1.A.10)
Seguro cambio autopistas	(4.832)	21.522	16.690	I.2.1.1.A.11)
Anticipos recargo municipal IRPF	6.580	-	6.580	I.2.1.1.A.12)
Transferencias a Ayuntamientos	41.710	34.310	76.020	I.2.1.1.A.13)
Prestaciones afectados síndrome Tóxico	1.055	10.935	11.990	I.2.1.1.A.14)
Oblig. no contabilizadas	19.006	19.859	38.865	I.2.1.1.A.15)
Dividendos Cía. Telefónica	(1.055)	(5.679)	(6.734)	I.2.1.1.B.3)
Efectos timbrados por multas	-	4.283	4.283	I.2.1.1.B.5)
Cupo del País Vasco	(3.852)	-	(3.852)	I.2.1.1.B.6)
Derechos no contraidos por transferencias de Org. Autónomos	(3.520)	(4.269)	(7.789)	I.2.1.1.B.7)
Intereses de ctas. bancarias en Agregadurías Mº Defensa	(2.190)	(6.897)	(9.087)	I.2.1.1.B.8)
Intereses de préstamos a Organismos Portuarios	407	(442)	(35)	I.2.1.1.B.9)
Diferencias de cambio positivas	1.687	(1.687)	-	I.2.1.1.B.10)
Premio de cobranza recursos propios C.E.E.	(669)	-	(669)	I.2.1.1.B.11)
Reintegro de gastos en inmovilizado	-	5.735	5.735	I.2.2.1.A.2)
Gastos incorrectamente activados	7.866	3.201	11.067	I.2.2.1.A.2)
Regularización aport. patrim. ICO	-	112.665	112.665	I.2.2.1.B.3)
Gastos acuñación moneda metálica	3.584	9.950	13.534	I.2.2.1.F.2)
Transf. capital ejercicios anteriores	-	(130.287)	(130.287)	I.2.2.2.B)
Transferencias corrientes de Organismos Autónomos	(73)	(1.210)	(1.283)	I.2.2.2.B)
SUMA	159.406	470.544	629.950	
Devoluciones de Impuestos	(199.600)	326.000	126.400	I.2.1.2
Intereses de pagarés y Letras del Tesoro	95.494	569.858	665.352	I.2.2.2.D.3)
TOTAL	55.300	1.366.402	1.421.702	

ANEXO I-8.1
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUMEN AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE
FASE DE OPERACION: AUTORIZADO

CLASE DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA			PESETAS			
		EN FIN AÑO ANTERIOR	EN EL AÑO	EN FIN DE AÑO ACTUAL	EN FIN AÑO ANTERIOR	EN EL AÑO	DIFERENCIAS DE CAMBIO	EN FIN AÑO ACTUAL
DOLARES	97,03000	1.212.300.000	78.059.000	1.290.359.000	133.179.641.100	7.574.064.770	(15.550.172.100)	125.203.533.770
MARCOS	63,97500	492.416.667	42.416.667	534.833.334	31.922.387.688	2.713.606.271	(420.031.417)	34.215.962.542
FRANCOS SUIZOS	74,97400	246.000.000		246.000.000	17.470.674.000		972.930.000	18.443.604.000
YENS	0,71499	75.750.000.000	5.000.000.000	80.750.000.000	57.891.937.500	3.574.950.000	(3.731.445.000)	57.735.442.500
E.C.U.	131,16400	240.000.000		240.000.000	31.311.120.000		168.240.000	31.479.360.000
FRANCOS FRANCESES	18,79000	600.000.000		600.000.000	11.379.600.000		(105.600.000)	11.274.000.000
TOTAL PESETAS					283.155.360.288	13.862.621.041	(18.666.078.517)	278.351.902.812

ANEXO I-8.2
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUMEN AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE
FASE DE OPERACION: DISPUESTO

CLASE DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA			PESETAS			
		EN FIN AÑO ANTERIOR	EN EL AÑO	EN FIN DE AÑO ACTUAL	EN FIN AÑO ANTERIOR	EN EL AÑO	DIFERENCIAS DE CAMBIO	EN FIN AÑO ACTUAL
DOLARES	97,03000	905.000.000	78.059.000	983.059.000	99.420.585.000	7.574.064.770	(11.608.435.000)	95.386.214.770
MARCOS	63,97500	941.371.937	42.416.667	983.788.604	61.027.259.932	2.713.606.271	(802.990.262)	62.937.875.941
FRANCOS SUIZOS	74,97400	637.673.502		637.673.502	45.286.934.439		2.521.998.699	47.808.933.138
YENS	0,71499	80.750.000.000	5.000.000.000	85.750.000.000	61.713.187.500	3.574.950.000	(3.977.745.000)	61.310.392.500
E.C.U.	131,16400	240.000.000		240.000.000	31.311.120.000		168.240.000	31.479.360.000
TOTAL PESETAS					298.759.086.871	13.862.621.041	(13.698.931.563)	298.922.776.349

ANEXO 1-8.3
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUMEN AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE
FASE DE OPERACION: CANCELADO

CLASE DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA			PESETAS			
		EN FIN AÑO ANTERIOR	EN EL AÑO	EN FIN DE AÑO ACTUAL	EN FIN AÑO ANTERIOR	EN EL AÑO	DIFERENCIAS DE CAMBIO	EN FIN AÑO ACTUAL
DOLARES	97,03000	187.130.000	139.440.000	326.570.000	20.557.540.410	13.529.863.200	(2.400.316.510)	31.687.087.100
MARCOS	63,97500	129.993.638	134.824.774	264.818.412	8.427.227.564	8.625.414.917	(110.884.573)	16.941.757.908
FRANCOS SUIZOS	74,97400	70.242.898	32.013.147	102.256.045	4.988.580.373	2.400.153.682	277.810.663	7.666.544.718
YENS	0,71499	13.750.000.000	11.060.000.000	24.810.000.000	10.508.437.500	7.907.789.400	(677.325.000)	17.738.901.900
E.C.U.	131,16400	85.689.000	81.907.000	167.596.000	11.179.244.007	10.743.249.748	60.067.989	21.982.561.744
TOTAL PESETAS					55.661.029.854	43.206.470.947	(2.850.647.431)	96.016.853.370

ANEXO 1-8.4
EJERCICIO 1990

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUMEN AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE
FASE DE OPERACION: SALDO DISPONIBLE

CLASE DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA			PESETAS			
		EN FIN AÑO ANTERIOR	EN EL AÑO	EN FIN DE AÑO ACTUAL	EN FIN AÑO ANTERIOR	EN EL AÑO	DIFERENCIAS DE CAMBIO	EN FIN AÑO ACTUAL
DOLARES	97,03000	717.870.000	(61.381.000)	656.489.000	78.863.044.590	(5.955.798.430)	(9.208.118.426)	63.699.127.734
MARCOS	63,97500	811.378.299	(92.408.107)	718.970.192	52.600.032.423	(5.911.808.645)	(692.105.745)	45.996.118.033
FRANCOS SUIZOS	74,97400	567.430.604	(32.013.147)	535.417.457	40.298.354.065	(2.400.153.683)	2.244.188.039	40.142.388.421
YENS	0,71499	67.000.000.000	(6.060.000.000)	60.940.000.000	51.204.750.000	(4.332.839.400)	(3.300.420.000)	43.571.490.600
E.C.U.	131,16400	154.311.000	(81.907.000)	72.404.000	20.131.875.993	(10.743.249.748)	108.172.011	9.496.798.256
TOTAL PESETAS					243.098.057.071	(29.343.849.906)	(10.848.284.121)	202.905.923.044

ANEXO I-9.1-1/1

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (en pesetas)

GASTOS

ORGANISMO	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES	1.022.906.000	882.065	1.023.788.065	872.351.768
M° DE JUSTICIA	1.022.906.000	882.065	1.023.788.065	872.351.768
FONDO CENTR.ATENC.GLES.DEFENSA	2.981.042.000	105.050	2.981.147.050	1.204.828.214
FONDO EXPL.SERV.CRIA CABALL. RE.	253.129.000	0	253.129.000	212.228.025
MUSEO DEL EJERCITO	166.539.000	11.206.050	177.745.050	176.714.736
GERENCIA INFRAEST DE DEFENSA	20.906.334.000	2.255.298.098	23.161.632.098	8.255.058.235
F.AT.GLES.SERV.GEOGRAF.EJERCITO	135.167.000	0	135.167.000	115.392.140
CANAL EXP.HIDRODINAM.EL PARDO	720.689.000	10.716.460	731.405.460	582.024.614
INST.SOCIAL DE LAS FF.AA.	37.328.856.000	873.399.435	38.202.255.435	37.104.267.572
M° DE DEFENSA	62.491.756.000	3.150.725.093	65.642.481.093	47.650.513.536
CENTRO GESTION Y COOP.TRIBUT.	31.118.879.000	15.912.990.648	47.031.869.648	30.963.287.096
SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA	8.356.845.000	1.312.201.840	9.669.046.840	8.380.107.776
INST.CONTABILIAD Y AUDITORIA	485.694.000	5.000.000	490.694.000	257.309.806
ESCUELA DE LA HACIENDA PUBLICA	2.248.757.000	0	2.248.757.000	1.674.254.092
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	15.720.941.000	966.714.114	16.687.655.114	15.129.387.579
M° DE ECONOMIA Y HACIENDA	57.931.116.000	18.196.906.602	76.128.022.602	56.404.346.349
JEFATURA DE TRAFICO	40.897.062.000	2.334.877.282	43.231.939.282	33.864.893.811
M° DEL INTERIOR	40.897.062.000	2.334.877.282	43.231.939.282	33.864.893.811
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	29.986.684.000	5.626.236.325	35.612.920.325	25.859.422.007
JUNTA CONSTRUC.INSTALAC.Y EQ.ESCOL.	76.204.727.000	20.360.440.557	96.565.167.557	62.999.488.817
M° DE EDUCACION Y CIENCIA	106.191.411.000	25.986.676.882	132.178.087.882	88.858.910.824
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	1.428.950.000.000	12.503.691.338	1.441.453.691.338	1.370.631.609.929
FONDO DE GARANTIA SALARIAL	76.668.752.000	0	76.668.752.000	57.190.514.908
INST.NAL. HIGIENE Y S. TRABAJO	6.199.710.000	459.851.506	6.659.561.506	5.726.674.489
M° DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL	1.511.818.462.000	12.963.542.844	1.524.782.004.844	1.433.548.799.326

ANEXO I-9.1-1/2

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (en pesetas)

GASTOS

ORGANISMO	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.486.387.000	519.728.893	5.006.115.893	3.674.290.547
INST.P.Y M.EMPRESA INDUSTRIAL	1.910.416.000	5.204.263	1.915.620.263	1.760.164.332
M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA	6.396.803.000	524.933.156	6.921.736.156	5.434.454.879
SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA	8.587.127.000	2.949.335.943	11.536.462.943	7.880.486.229
INST.RELAC AGRARIAS (I R A)	13.992.892.000	753.980.000	14.746.872.000	12.642.031.790
INST.NAL.REFORMA Y D AGRARIO	56.164.647.000	29.918.605.898	86.083.252.898	71.854.603.525
AGENCIA PARA EL ACEITE OLIVA	592.071.000	0	592.071.000	350.919.790
M° AGRICULTURA PESCA Y ALIMENT.	79.336.737.000	33.621.921.841	112.958.658.841	92.728.041.334
INST.NAL.ADMINISTRAC.PUBLICAS	2.851.875.000	110.475.000	2.962.350.000	2.180.206.936
MUTUALIDAD GRAL.FUNC.CIV.ESTADO	89.409.579.000	260.250.612	89.669.829.612	78.997.635.494
M° PARA LAS ADMONES. PUBLICAS	92.261.454.000	370.725.612	92.632.179.612	81.177.842.430
ESCUELA OFICIAL DE TURISMO	167.632.000	60.013.318	227.645.318	202.577.182
M° TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	167.632.000	60.013.318	227.645.318	202.577.182
INST.CINEMAT.Y ARTES AUDIOV.	6.093.400.000	1.188.944.534	7.282.344.534	5.136.920.868
MUSEO NACIONAL DEL PRADO	2.382.500.000	218.250.577	2.600.750.577	2.326.448.133
M° DE CULTURA	8.475.900.000	1.407.195.111	9.883.095.111	7.463.369.001
CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCION.	503.055.000	3.621.384	506.676.384	392.750.443
M° DE RELACIONES CON LAS CORTES	503.055.000	3.621.384	506.676.384	392.750.443
INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO	2.075.820.000	159.144.024	2.234.964.024	1.959.772.130
M° DE SANIDAD Y CONSUMO	2.075.820.000	159.144.024	2.234.964.024	1.959.772.130
INSTITUTO DE LA MUJER	2.014.658.000	61.631.213	2.076.289.213	1.972.552.151
M° ASUNTOS SOCIALES	2.014.658.000	61.631.213	2.076.289.213	1.972.552.151
TOTAL	1.971.584.772.000	98.842.796.427	2.070.427.568.427	1.852.531.175.164

ANEXO I-9.1-2/1

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (en pesetas)

INGRESOS

ORGANISMO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS
CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES	1.022.906.000	882.065	1.023.788.065	961.315.600
Mº JUSTICIA	1.022.906.000	882.065	1.023.788.065	961.315.600
FONDO CENTR.ATENC.GLES.DEFENSA	2.981.042.000	105.050	2.981.147.050	3.363.922.907
FONDO EXPL.SERV.CRIA CABALL.RE.	253.129.000	0	253.129.000	268.491.150
MUSEO DEL EJERCITO	166.539.000	11.206.050	177.745.050	148.011.850
GERENCIA INFRAEST.DE DEFENSA	20.906.334.000	2.255.298.098	23.161.632.098	12.601.990.983
F.AT.GLES.SERV.GEOGRAF.EJERCITO	135.167.000	0	135.167.000	157.964.267
CANAL EXP.HIDRODINAM.EL PARDO	720.689.000	10.716.460	731.405.460	658.853.770
INST.SOCIAL DE LAS FF.AA.	37.328.856.000	873.399.435	38.202.255.435	40.487.712.531
Mº DEFENSA	62.491.756.000	3.150.725.093	65.642.481.093	57.686.947.458
CENTRO GESTION Y COOP.TRIBUT.	31.118.879.000	15.912.990.648	47.031.869.648	31.077.466.903
SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA	8.356.845.000	1.312.201.840	9.669.046.840	8.701.349.879
INST.CONTABILIAD Y AUDITORIA	485.694.000	5.000.000	490.694.000	479.271.400
ESCUELA DE LA HACIENDA PUBLICA	2.248.757.000	0	2.248.757.000	1.907.966.282
	15.720.941.000	966.714.114	16.687.655.114	16.761.780.149
Mº ECONOMIA Y HACIENDA	57.931.116.000	18.196.906.602	76.128.022.602	58.927.834.613
JEFATURA DE TRAFICO	40.897.062.000	2.334.877.282	43.231.939.282	37.829.312.483
Mº INTERIOR	40.897.062.000	2.334.877.282	43.231.939.282	37.829.312.483
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	29.986.684.000	5.626.236.325	35.612.920.325	29.977.748.419
	76.204.727.000	20.360.440.557	96.565.167.557	69.821.237.703
Mº EDUCACION	106.191.411.000	25.986.676.882	132.178.087.882	99.798.986.122
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	1.428.950.000.000	12.503.691.338	1.441.453.691.338	1.534.030.053.652
FONDO DE GARANTIA SALARIAL	76.668.752.000	0	76.668.752.000	53.031.863.157
INST.NAL. HIGIENE Y S. TRABAJO	6.199.710.000	459.851.506	6.659.561.506	6.694.026.984
Mº TRABAJO Y SEG.SOC.	1.511.818.462.000	12.963.542.844	1.524.782.004.844	1.593.755.943.793

ANEXO I-9.1-2/2

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (en pesetas)

INGRESOS

ORGANISMO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS
REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.486.387.000	519.728.893	5.006.115.893	2.979.013.442
INST.P.Y M.EMPRESA INDUSTRIAL	1.910.416.000	5.204.263	1.915.620.263	1.639.733.787
Mº INDUSTRIA Y ENERGIA	6.396.803.000	524.933.156	6.921.736.156	4.618.747.229
SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA	8.587.127.000	2.949.335.943	11.536.462.943	8.290.085.744
INST.RELAC.AGRARIAS (I.R.A.)	13.992.892.000	753.980.000	14.746.872.000	14.157.344.885
INST.NAL.REFORMA Y D. AGRARIO	56.164.647.000	29.918.605.898	86.083.252.898	79.579.172.600
AGENCIA PARA EL ACEITE OLIVA	592.071.000	0	592.071.000	580.776.016
Mº AGRICULTURA	79.336.737.000	33.621.921.841	112.958.658.841	102.607.379.245
INST.NAL.ADMINISTRAC.PUBLICAS	2.851.875.000	110.475.000	2.962.350.000	2.467.554.702
MUTUALIDAD GRAL.FUNC.CIV.ESTADO	89.409.579.000	260.250.612	89.669.829.612	73.183.631.950
Mº PARA LAS ADMONES.PUBLICAS	92.261.454.000	370.725.612	92.632.179.612	75.651.186.652
ESCUELA OFICIAL DE TURISMO	167.632.000	60.013.318	227.645.318	246.421.241
Mº TRANSPORTE TURISMO Y COMUN.	167.632.000	60.013.318	227.645.318	246.421.241
INST.CINEMAT.Y ARTES AUDIOV.	6.093.400.000	1.188.944.534	7.282.344.534	6.005.539.068
MUSEO NACIONAL DEL PRADO	2.382.500.000	218.250.577	2.600.750.577	2.689.989.832
Mº CULTURA	8.475.900.000	1.407.195.111	9.883.095.111	8.695.528.900
CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCION.	503.055.000	3.621.384	506.676.384	445.169.959
Mº RELACIONES CON LAS CORTES	503.055.000	3.621.384	506.676.384	445.169.959
INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO	2.075.820.000	159.144.024	2.234.964.024	2.055.860.870
Mº SANIDAD Y CONSUMO	2.075.820.000	159.144.024	2.234.964.024	2.055.860.870
INSTITUTO DE LA MUJER	2.014.658.000	61.631.213	2.076.289.213	1.850.445.915
Mº ASUNTOS SOCIALES	2.014.658.000	61.631.213	2.076.289.213	1.850.445.915
TOTAL	1.971.584.772.000	98.842.796.427	2.070.427.568.427	2.045.131.080.080

ANEXO I-9.2-1

EJERCICIO 1990

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS.
CLASIFICACION ECONOMICA (en pesetas)

GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1.- GASTOS DE PERSONAL	120.937.170.000	3.016.096.152	123.953.266.152	113.290.125.254
2.- GAST. B. CTES. Y SERV.	125.933.364.000	5.695.046.235	131.628.410.235	122.197.263.619
3.- GASTOS FINANCIEROS	4.276.816.000	80.683.894	4.357.499.894	3.903.379.409
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.465.007.336.000	7.866.039.071	1.472.873.375.071	1.391.953.664.746
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.716.154.686.000	16.657.865.352	1.732.812.551.352	1.631.344.433.028
6.- INVERSIONES REALES	188.493.824.000	59.459.239.395	247.953.063.395	163.006.016.647
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.146.293.000	22.539.148.883	58.685.441.883	41.423.983.209
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	224.640.117.000	81.998.388.278	306.638.505.278	204.429.999.856
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.940.794.803.000	98.656.253.630	2.039.451.056.630	1.835.774.432.884
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	27.007.621.000	186.428.995	27.194.049.995	12.976.520.135
9.- PASIVOS FINANCIEROS	3.782.348.000	113.802	3.782.461.802	3.780.222.145
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.789.969.000	186.542.797	30.976.511.797	16.756.742.280
TOTAL	1.971.584.772.000	98.842.796.427	2.070.427.568.427	1.852.531.175.164

ANEXO I-9.2-2

EJERCICIO 1990

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS.
CLASIFICACION ECONOMICA (en pesetas)

INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCIDOS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	925.731.977.000	6.033.000.000	931.764.977.000	1.076.898.237.646
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	61.052.703.000	352.926.127	61.405.629.127	69.855.505.901
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	589.736.200.000	1.053.174.091	590.789.374.091	590.479.948.110
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	8.057.608.000	0	8.057.608.000	9.651.806.174
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.584.578.488.000	7.439.100.218	1.592.017.588.218	1.746.885.497.831
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	20.892.077.000	0	20.892.077.000	12.316.135.775
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	247.843.275.000	24.564.896.767	272.408.171.767	269.714.291.349
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	268.735.352.000	24.564.896.767	293.300.248.767	282.030.427.124
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.853.313.840.000	32.003.996.985	1.885.317.836.985	2.028.915.924.955
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	114.270.932.000	66.838.799.442	181.109.731.442	12.201.630.715
9.- PASIVOS FINANCIEROS	4.000.000.000	0	4.000.000.000	4.013.524.410
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.270.932.000	66.838.799.442	185.109.731.442	16.215.155.125
TOTAL	1.971.584.772.000	98.842.796.427	2.070.427.568.427	2.045.131.080.080

ANEXO I.10
EJERCICIO 1990

BALANCE DIFERENCIAL AGREGADO DE SALDOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

A C T I V O			
CONCEPTO	31/12/89	31/12/90	VARIACIONES
INMOVILIZADO	356.502.813.269	562.001.657.696	205.498.844.427
EXISTENCIAS	44.600.000	44.600.000	0
DEUDORES	308.576.023.193	335.723.988.749	27.147.965.556
CUENTAS FINANCIERAS	487.944.008.917	682.242.081.569	194.298.072.652
TOTAL ACTIVO	1.153.067.445.379	1.580.012.328.014	426.944.882.635

P A S I V O			
CONCEPTO	31/12/89	31/12/90	VARIACIONES
PATRIMONIO, RESERVAS, RDOS. PTES. APLICACION	537.428.503.670	713.422.202.696	175.993.699.026
SUBVENCIONES DE CAPITAL	294.229.018.557	529.891.260.138	235.662.241.581
DEUDAS MEDIO Y LARGO PLAZO	44.868.687.026	44.323.914.387	(544.772.639)
DEUDAS CORTO PLAZO	197.864.976.565	223.025.992.248	25.161.015.683
PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	26.473.621.816	26.162.538.614	(311.083.202)
RESULTADOS	52.202.637.745	43.186.419.931	(9.016.217.814)
TOTAL PASIVO	1.153.067.445.379	1.580.012.328.014	426.944.882.635

ANEXO I.11
EJERCICIO 1990

ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
CUENTAS DE RESULTADOS (en pesetas)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO			
D E B E		**H A B E R**	
Existencias, saldos iniciales	44.600.000	Existencias, saldos finales	44.600.000
Gastos de personal	104.702.435.258	Ventas	34.069.022.904
Gastos financieros	3.903.379.409	Rentas de la propiedad y de la empresa	9.570.084.332
Tributos	110.955.790	Cotizaciones sociales	1.076.898.237.646
Trabajos, sumin. y serv. exteriores	136.680.997.708	Subvenciones de explotación	480.000.000
Prestaciones sociales	980.301.922.899	Transferencias corrientes	589.999.948.110
Subvenciones de explotación	2.387.500	Otros ingresos	35.866.791.297
Transferencias corrientes	422.782.911.201		
Tranferencias de capital	41.423.983.209		
Dotación del ejerc. para amort. y prov.	4.482.955.272		
SALDO ACREEDOR	52.492.156.043		
T O T A L	1.746.928.684.289	T O T A L	1.746.928.684.289
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS			
Pérdidas en enajenación de inmovilizado	1.730.885	Otros abonos	45.340.684
Pérdidas extraordinarias en inmovilizado	85.900.670		
Otros cargos	2.835.819.946		
		SALDO DEUDOR	2.878.110.817
T O T A L	2.923.451.501	T O T A L	2.923.451.501
RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES			
Negativos en operac. de enajenación	1.049.109.912	Positivos en operac. de enajenación	977.023
Otros cargos	760.502	Dot. ej. ant. a las provisiones para depreciación de invers. financieras	6.925
		SALDO DEUDOR	1.048.886.466
TOTAL	1.049.870.414	TOTAL	1.049.870.414
MODIFICACION DE OBLIGACIONES Y DERECHOS			
Modific. de dchos. de ejerc. anteriores	4.723.723.362	Modific.de dchos.de ejercs. anteriores	-111.116.567
Modific. de oblgcs.de ejercs. anteriores	-4.488.681	Modific.de oblgcs.de ejercs.anteriores	995.944.759
		SALDO DEUDOR	3.834.406.489
T O T A L	4.719.234.681	T O T A L	4.719.234.681
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Resultados Extraordinarios	2.878.110.817	Resultados ctes. del ejercicio	52.492.156.043
Resultados Cartera de Valores	1.048.886.466		
Modificac. dchos. y obligac. ejerc. ant.	3.834.406.489		
BENEFICIO NETO TOTAL	44.730.752.271		
T O T A L	52.492.156.043	T O T A L	52.492.156.043

ANEXO I.12
EJERCICIO 1990

ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO COMPARATIVO ENTRE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CUENTA DE RESULTADOS Y LOS CORRELATIVOS DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y DEL BALANCE (en pesetas).

DEBE		S/RDOS. CORRIENTES	S/LIQ. PTO. Y BALANCE	DIFERENCIAS
38	Existencias iniciales	44.600.000	N/A	N/A
60	Compras			
61+65	G. Personal y Prest. soc.	1.085.004.358.157	115.677.214.085	969.327.144.072
62	Gastos Financieros	3.903.379.409	3.903.379.409	
63+64	Trab. S. y S. ext. y Tributos	136.791.953.498	119.810.174.788	16.981.778.710
66+67	Tranf. ctes. y sub. explot.	422.785.298.701	1.391.953.664.746	(969.168.366.045)
68	Transferencias de Capital	41.423.983.209	41.423.983.209	
69	Dot. Amortiz. y Provisiones	4.482.955.272	N/A	N/A
	SALDO ACREEDOR	52.492.156.043		
	T O T A L	1.746.928.684.289	1.672.768.416.237	17.140.556.737

HABER		S/RDOS. CORRIENTES	S/LIQ. PTO. Y BALANCE	DIFERENCIAS
30/38	Existencias finales	44.600.000	44.600.000	
71+72	Ventas + R. Prop. y Empresa	43.639.107.236	43.813.163.681	(174.056.445)
74	Cotizaciones Sociales	1.076.898.237.646	1.076.898.237.646	
75+76	Sub. Explot. y Transf. ctes.	590.479.948.110	590.479.948.110	
78	Otros ingresos	35.866.791.297	35.694.148.394	172.642.903
	T O T A L	1.746.928.684.289	1.746.930.097.831	(1.413.542)

ANEXO I.13.1-1/1

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS (en pesetas)

GASTOS

ORGANISMO	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PATRON.CASAS ARMADA (MARINA)	2.074.783.000	137.725.044	2.212.508.044	2.164.405.024
SERVICIO MILITAR CONSTRUCCIONES	1.420.693.000	14.339.325	1.435.032.325	827.825.422
INST.N.TECN.AEROESP.E.TERRADAS	8.702.707.000	1.397.068.976	10.099.775.976	8.491.114.440
M° DE DEFENSA	12.198.183.000	1.549.133.345	13.747.316.345	11.483.344.886
PARQUE MOVIL MINISTERIAL	11.061.920.000	277.319.555	11.339.239.555	11.146.035.854
ORG.NAL.LOTERIAS Y AP ESTADO	215.359.736.000	0	215.359.736.000	186.778.431.900
CONSORCIO COMPENSACION SEGUROS	6.081.875.000	4.785.908.090	10.867.783.090	8.199.135.167
M° DE ECONOMIA Y HACIENDA	232.503.531.000	5.063.227.645	237.566.758.645	206.123.602.921
PATRON.VIVIENDAS GUARDIA CIVIL	1.067.953.000	268.625.708	1.336.578.708	688.593.460
M° DEL INTERIOR	1.067.953.000	268.625.708	1.336.578.708	688.593.460
JUNTA PUERTO DE ALMERIA	1.002.063.000	38.967.126	1.041.030.126	1.032.605.891
JUNTA DEL PUERTO DE GIJON	4.229.535.000	276.393	4.229.811.393	3.985.999.266
JUNTA DEL PUERTO Y RIA DE AVILES	1.536.912.000	0	1.536.912.000	1.458.110.675
JUNTA PUERTO BAHIA DE CADIZ	3.070.009.000	15.351.410	3.085.360.410	3.029.492.952
JUNTA DEL PUERTO DE CARTAGENA	2.068.797.000	18.297.322	2.087.094.322	2.031.986.347
JUNTA PUERTO DE CASTELLON	1.017.789.000	12.039.777	1.029.828.777	984.769.053
JUNTA PUERTO DE CEUTA	1.195.811.000	38.310.008	1.234.121.008	1.176.772.571
JUNTA PUERTO DE LA CORUÑA	2.643.788.000	50.125.988	2.693.913.988	2.650.183.334
JUNTA PUERTO DE EL FERROL	1.136.041.000	1.530.193	1.137.571.193	989.412.347
JUNTA PTO. LA LUZ Y LAS PALMAS	4.017.490.000	0	4.017.490.000	3.867.551.893
JUNTA PUERTO DE MALAGA	1.455.496.000	51.086.149	1.506.582.149	1.478.967.358
JUNTA PUERTO DE PALMA DE MALLORCA	2.024.691.000	43.672.525	2.068.363.525	1.989.301.566
JUNTA PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	2.707.365.000	9.485.872	2.716.850.872	2.675.267.757
JUNTA PTO.SEVILLA Y RIA GUADAL	3.168.475.000	891.405.828	4.059.880.828	3.111.343.106
JUNTA PUERTO Y RIA DE VIGO	2.092.999.000	30.240.000	2.123.239.000	2.074.038.591
JUNTA PUERTO Y RIA PONTEVEDRA	685.802.000	13.542.933	699.344.933	671.027.815
JUNTA PUERTO VILLAGARCIA AROSA	380.341.000	12.688.479	393.029.479	364.198.157
COMISION ADMVA.GRUPOS PUERTOS	8.305.094.000	38.920.517	8.344.014.517	7.263.142.394
CONF.HIDROGRAF. DEL EBRO	3.995.801.000	153.494.164	4.149.295.164	3.411.149.146
CONF.HIDROGRAF.DEL SUR DE ESPAÑA	2.142.415.000	0	2.142.415.000	1.933.922.933
CONF.HIDROGRAF. GUADALQUIVIR	4.611.659.000	121.739.657	4.733.398.657	3.558.191.402
CONF.HIDROGRAF. DEL GUADIANA	3.038.230.000	16.384.010	3.054.614.010	2.537.898.074
CONF.HIDROGRAF. DEL JUCAR	1.808.806.000	30.874.695	1.839.680.695	1.479.017.386
CONF.HIDROGRAF. DEL SEGURA	3.910.400.000	124.024.836	4.034.424.836	3.170.072.882
CONF.HIDROGRAF. NORTE DE ESP.	2.076.028.000	31.172.930	2.107.200.930	1.884.537.061
CONF.HIDROGRAF. DEL TAJO	3.541.592.000	10.482.495	3.552.074.495	2.272.066.098
MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	2.331.500.000	58.210.702	2.389.710.702	2.255.043.706
PARQUE DE MAQUINARIA	1.398.359.000	104.510.746	1.502.869.746	1.405.945.956
CENTRO ESTUDIOS Y EXP. OO.PBCAS.	4.777.223.000	48.750.000	4.825.973.000	4.623.941.322
CENTRO NACIONAL INFORMACION GEOGRAF.	439.279.000	0	439.279.000	20.148.918
M° DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	76.809.790.000	1.965.584.755	78.775.374.755	69.386.105.957

ANEXO I.13.1-1/2

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS (en pesetas)

GASTOS

ORGANISMO	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CONSEJO SUP. INVEST.CIENTIFIC.	32.368.165.000	794.992.148	33.163.157.148	32.896.248.061
INST. ASTROFISICA DE CANARIAS	959.371.000	377.870.297	1.337.241.297	1.107.753.065
M° DE EDUCACION Y CIENCIA	33.327.536.000	1.172.862.445	34.500.398.445	34.004.001.126
C.INVEST.ENERG.MED Y TECNOLOG	7.076.930.000	906.118.703	7.983.048.703	7.582.529.844
INST.GEOLOG Y MINERO DE ESPAÑA	4.998.988.000	524.884.986	5.523.872.986	5.325.353.470
M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA	12.075.918.000	1.431.003.689	13.506.921.689	12.907.883.314
SERV.NAL.PRODUC.AGRAR.(SENPA)	28.332.318.000	643.516.274	28.975.834.274	12.226.694.707
INST.CONSER.NATURALEZA (ICONA)	37.384.245.000	2.302.991.540	39.687.236.540	31.282.977.910
FONDO ORD.REGUL.PROD. y PREC.AGR	250.229.324.000	58.121.744.282	308.351.068.282	297.817.700.775
ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR.	10.369.574.000	2.239.030.237	12.608.604.237	11.474.428.779
F.REG.ORG.MERC.PR.PESCA Y C.M.	1.755.107.000	0	1.755.107.000	1.368.196.080
INSTITUTO ESPAÑOL OCEANOGRAFIA	2.784.031.000	165.145.939	2.949.176.939	2.378.508.824
M° AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION	330.854.599.000	63.472.428.272	394.327.027.272	356.548.507.075
CAJA POSTAL DE AHORROS	23.938.344.000	1.122.964.676	25.061.308.676	18.913.915.943
AEROPUERTOS NACIONALES	67.538.830.000	10.430.544.712	77.969.374.712	70.426.225.353
INST.NAL.PROMOCION DEL TURISMO	6.507.014.000	612.891.358	7.119.905.358	6.722.454.936
M° TRANSPORTE,TURISMO Y COM.	97.984.188.000	12.166.400.746	110.150.588.746	96.062.596.232
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	3.404.314.000	35.000.000	3.439.314.000	2.484.199.904
M° DE RELACIONES CON LAS CORTES	3.404.314.000	35.000.000	3.439.314.000	2.484.199.904
INSTITUTO SALUD CARLOS III	8.397.929.000	1.151.380.679	9.549.309.679	8.928.357.288
M° DE SANIDAD Y CONSUMO	8.397.929.000	1.151.380.679	9.549.309.679	8.928.357.288
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	3.257.715.000	445.645.983	3.703.360.983	3.592.567.875
M° DE ASUNTOS SOCIALES	3.257.715.000	445.645.983	3.703.360.983	3.592.567.875
TOTAL	811.881.656.000	88.721.293.267	900.602.949.267	802.209.760.038

ANEXO I-12.1-2/1

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS (en pesetas)

INGRESOS

ORGANISMO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS
PATRON.CASAS ARMADA (MARINA)	2.074.783.000	137.725.044	2.212.508.044	2.140.698.094
SERVICIO MILITAR CONSTRUCCIONES	1.420.693.000	14.339.325	1.435.032.325	380.332.897
INST.N.TECN.AEROESP.E.TERRADAS	8.702.707.000	1.397.068.976	10.099.775.976	7.349.124.827
M° DE DEFENSA	12.198.183.000	1.549.133.345	13.747.316.345	9.870.155.818
PARQUE MOVIL MINISTERIAL	11.061.920.000	277.319.555	11.339.239.555	7.637.014.946
ORG.NAL.LOTERIAS Y AP ESTADO	215.359.736.000	0	215.359.736.000	527.086.043
CONSORCIO COMPENSACION SEGUROS	6.081.875.000	4.785.908.090	10.867.783.090	11.429.260.378
M° DE ECONOMIA Y HACIENDA	232.503.531.000	5.063.227.645	237.566.758.645	19.593.361.367
PATRON.VIVIENDAS GUARDIA CIVIL	1.067.953.000	268.625.708	1.336.578.708	628.583.838
M° DEL INTERIOR	1.067.953.000	268.625.708	1.336.578.708	628.583.838
JUNTA PUERTO DE ALMERIA	1.002.063.000	38.967.126	1.041.030.126	420.232.063
JUNTA DEL PUERTO DE GIJON	4.229.535.000	276.393	4.229.811.393	1.625.599.033
JUNTA DEL PUERTO Y RIA DE AVILES	1.536.912.000	0	1.536.912.000	656.407.254
JUNTA PUERTO BAHIA DE CADIZ	3.070.009.000	15.351.410	3.085.360.410	2.182.773.027
JUNTA DEL PUERTO DE CARTAGENA	2.068.797.000	18.297.322	2.087.094.322	68.022.767
JUNTA PUERTO DE CASTELLON	1.017.789.000	12.039.777	1.029.828.777	187.377.848
JUNTA PUERTO DE CEUTA	1.195.811.000	38.310.008	1.234.121.008	606.697.350
JUNTA PUERTO DE LA CORUÑA	2.643.788.000	50.125.988	2.693.913.988	224.681.226
JUNTA PUERTO DE EL FERROL	1.136.041.000	1.530.193	1.137.571.193	862.990.576
JUNTA PTO. LA LUZ Y LAS PALMAS	4.017.490.000	0	4.017.490.000	436.399.503
JUNTA PUERTO DE MALAGA	1.455.496.000	51.086.149	1.506.582.149	255.454.336
JUNTA DEL PUERTO DE PALMA DE MALLORCA	2.024.691.000	43.672.525	2.068.363.525	312.337.509
JUNTA DEL PUERTO DE STA.CRUZ DE TENERIFE	2.707.365.000	9.485.872	2.716.850.872	61.018.279
JUNTA PTO.SEVILLA Y RIA GUADAL	3.168.475.000	891.405.828	4.059.880.828	3.026.437.002
JUNTA PUERTO Y RIA DE VIGO	2.092.999.000	30.240.000	2.123.239.000	260.815.187
JUNTA PUERTO Y RIA PONTEVEDRA	685.802.000	13.542.933	699.344.933	15.365.251
JUNTA PUERTO VILLAGARCIA AROSA	380.341.000	12.688.479	393.029.479	77.035.032
COMISION ADMVA.GRUPOS PUERTOS	8.305.094.000	38.920.517	8.344.014.517	6.701.055.797
CONF.HIDROGRAF. DEL EBRO	3.995.801.000	153.494.164	4.149.295.164	2.217.526.453
CONF.HIDROGRAF. DEL SUR DE ESPAÑA	2.142.415.000	0	2.142.415.000	1.694.911.573
CONF.HIDROGRAF. GUADALQUIVIR	4.611.659.000	121.739.657	4.733.398.657	2.187.746.119
CONF.HIDROGRAF. DEL GUADIANA	3.038.230.000	16.384.010	3.054.614.010	1.628.787.850
CONF.HIDROGRAF. DEL JUCAR	1.808.806.000	30.874.695	1.839.680.695	2.059.133.793
CONF.HIDROGRAF. DEL SEGURA	3.910.400.000	124.024.836	4.034.424.836	1.437.827.731
CONF.HIDROGRAF. NORTE DE ESP.	2.076.028.000	31.172.930	2.107.200.930	3.315.774.631
CONF.HIDROGRAF. DEL TAJO	3.541.592.000	10.482.495	3.552.074.495	2.608.497.329
MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	2.331.500.000	58.210.702	2.389.710.702	677.493.471
PARQUE DE MAQUINARIA	1.398.359.000	104.510.746	1.502.869.746	625.636.991
CENTRO ESTUDIOS Y EXP.OO.PBCAS.	4.777.223.000	48.750.000	4.825.973.000	3.518.610.009
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAF.	439.279.000	0	439.279.000	76.000.000
M° DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	76.809.790.000	1.965.584.755	78.775.374.755	40.028.644.990

ANEXO I-13.1-2/2

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS (en pesetas)

INGRESOS

ORGANISMO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS
CONSEJO SUP. INVEST.CIENTIFIC.	32.368.165.000	794.992.148	33.163.157.148	31.609.187.827
INST. ASTROFISICA DE CANARIAS	959.371.000	377.870.297	1.337.241.297	915.306.279
M° DE EDUCACION Y CIENCIA	33.327.536.000	1.172.862.445	34.500.398.445	32.524.494.106
C.INVEST.ENERG.MED.Y TECNOLOG.	7.076.930.000	906.118.703	7.983.048.703	7.361.481.612
INST.GEOLOG.Y MINERO DE ESPAÑA	4.998.988.000	524.884.986	5.523.872.986	5.256.342.543
M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA	12.075.918.000	1.431.003.689	13.506.921.689	12.617.824.155
SERV.NAL.PRODUC.AGRAR.(SENPA)	28.332.318.000	643.516.274	28.975.834.274	24.870.141.419
INST.CONSER.NATURALEZA (ICONA)	37.384.245.000	2.302.991.540	39.687.236.540	34.760.365.955
FONDO ORD.REGUL.PROD. Y PREC.AGR.	250.229.324.000	58.121.744.282	308.351.068.282	324.636.365.153
ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR.	10.369.574.000	2.239.030.237	12.608.604.237	4.477.838.935
F.REG.ORG.MERC.PR.PESCA Y C.M.	1.755.107.000	0	1.755.107.000	1.045.764.162
INSTITUTO ESPAÑOL OCEANOGRAFIA	2.784.031.000	165.145.939	2.949.176.939	2.491.940.772
M° DE AGRICULTURA PESCA Y ALIM.	330.854.599.000	63.472.428.272	394.327.027.272	392.282.416.396
CAJA POSTAL DE AHORROS	23.938.344.000	1.122.964.676	25.061.308.676	52.978.642
AEROPUERTOS NACIONALES	67.538.830.000	10.430.544.712	77.969.374.712	899.801.154
INST.NAL.PROMOCION DEL TURISMO	6.507.014.000	612.891.358	7.119.905.358	6.150.090.088
M° DE TRANSPORTES TURISMO Y COM.	97.984.188.000	12.166.400.746	110.150.588.746	7.102.869.884
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	3.404.314.000	35.000.000	3.439.314.000	24.151.787
M° DE RELACIONES CON LAS CORTES	3.404.314.000	35.000.000	3.439.314.000	24.151.787
INSTITUTO SALUD CARLOS III	8.397.929.000	1.151.380.679	9.549.309.679	7.804.420.849
M° DE SANIDAD Y CONSUMO	8.397.929.000	1.151.380.679	9.549.309.679	7.804.420.849
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	3.257.715.000	445.645.983	3.703.360.983	3.591.170.443
M° DE ASUNTOS SOCIALES	3.257.715.000	445.645.983	3.703.360.983	3.591.170.443
TOTAL	811.881.656.000	88.721.293.267	900.602.949.267	526.068.093.633

ANEXO I.13.2-1

EJERCICIO 1990

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS. CLASIFICACION ECONOMICA. (en pesetas)

GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1.- GASTOS DE PERSONAL	124.579.186.000	7.631.450.292	132.210.636.292	122.012.392.651
2.- GAST. B. CTES. Y SERV.	24.519.167.000	1.735.460.734	26.254.627.734	22.717.359.861
3.- GASTOS FINANCIEROS	6.487.423.000	5.000.000	6.492.423.000	3.189.273.042
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.507.931.000	63.528.736.672	515.036.667.672	478.472.882.165
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	607.093.707.000	72.900.647.698	679.994.354.698	626.391.907.719
6.- INVERSIONES REALES	108.929.110.000	8.293.268.069	117.222.378.069	93.492.019.236
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.816.820.000	6.732.200.000	68.549.020.000	62.518.284.379
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	170.745.930.000	15.025.468.069	185.771.398.069	156.010.303.615
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	777.839.637.000	87.926.115.767	865.765.752.767	782.402.211.334
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	3.110.248.000	868.363.500	3.978.611.500	3.864.535.352
9.- PASIVOS FINANCIEROS	30.931.771.000	(73.186.000)	30.858.585.000	15.943.013.352
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.042.019.000	795.177.500	34.837.196.500	19.807.548.704
TOTAL	811.881.656.000	88.721.293.267	900.602.949.267	802.209.760.038

ANEXO I.13.2-2

EJERCICIO 1990

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS. CLASIFICACION ECONOMICA (en pesetas).

INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCIDOS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	10.602.628.000	147.885.171	10.750.513.171	17.619.081.965
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318.700.832.000	76.583.877.130	395.284.709.130	399.506.364.300
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	368.060.792.000	9.188.458.095	377.249.250.095	7.548.038.874
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	697.364.252.000	85.920.220.396	783.284.472.396	424.673.485.139
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	660.558.000	0	660.558.000	1.245.337.375
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.060.084.000	2.801.072.871	72.861.156.871	71.923.603.054
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.720.642.000	2.801.072.871	73.521.714.871	73.168.940.429
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	768.084.894.000	88.721.293.267	856.806.187.267	497.842.425.568
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	729.712.000	0	729.712.000	729.962.863
9.- PASIVOS FINANCIEROS	43.067.050.000	0	43.067.050.000	27.495.705.202
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.796.762.000	0	43.796.762.000	28.225.668.065
TOTAL	811.881.656.000	88.721.293.267	900.602.949.267	526.068.093.633

ANEXO I-14
EJERCICIO 1990

BALANCE DIFERENCIAL AGREGADO DE SALDOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS 1989/1990 (en pesetas)

A C T I V O

CONCEPTO	31/12/89	31/12/90	VARIACION
INMOVILIZADO	1.778.287.084.845	1.803.742.714.141	25.455.629.296
EXISTENCIAS	(36.976.102.648)	(20.574.731.424)	16.401.371.224
DEUDORES	212.430.840.024	249.596.376.456	37.165.536.432
CUENTAS FINANCIERAS	776.507.245.798	948.507.196.568	171.999.950.770
SITUACIONES TRANST. DE FINANCIACION	1.317.000	1.317.000	-
AJUSTES POR PERIODIFICACION	2.340.942.566	2.936.819.554	595.876.988
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	240.410.594.522	242.694.217.885	2.283.623.363
TOTAL ACTIVO	2.973.001.922.107	3.226.903.910.180	253.901.988.073

P A S I V O

CONCEPTO	31/12/89	31/12/90	VARIACION
PATRIMONIO Y RESERVAS	651.132.631.555	712.307.752.536	61.175.120.981
SUBVENCIONES DE CAPITAL	635.048.885.337	627.559.076.190	(7.489.809.147)
PROVISIONES	44.249.430.621	52.023.255.326	7.773.824.705
DEUDAS MEDIO Y LARGO PLAZO	512.150.004.121	591.792.511.930	79.642.507.809
DEUDAS A CORTO PLAZO	991.457.842.876	1.061.064.444.649	69.606.601.773
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	87.026.871.280	81.057.307.588	(5.969.563.692)
AJUSTES POR PERIODIFICACION	15.473.892.485	23.393.082.575	7.919.190.090
RESULTADOS	36.462.363.832	77.706.479.386	41.244.115.554
TOTAL PASIVO	2.973.001.922.107	3.226.903.910.180	253.901.988.073

ANEXO I-15.1/2
EJERCICIO 1990

ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS

CUENTAS DE RESULTADOS (en pesetas)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO			
DEBE		**HABER**	
Existencias, saldos iniciales	(36.976.102.648)	Existencias, saldos finales	(20.574.731.424)
Provisiones deprec. existencias ejercicio	244.428.170	Provisiones deprec. existencias. Ejercicio anterior	319.684.113
Compras	535.731.351.156	Ventas	804.616.380.536
Gastos de personal	125.229.113.413	Rentas de la Propiedad y de la empresa	181.128.456.032
Gastos financieros	67.194.166.398	Tributos ligados a la prod. e import.	8.666.845.344
Tributos	2.012.160.252	Subvenciones de explotación	336.517.011.779
Trabajos, suministros y serv. exteriores	97.978.458.442	Transferencias corrientes	62.114.387.566
Prestaciones sociales	830.065.654	Otros ingresos	9.719.877.713
Subvenciones de explotación	275.268.266.078	Provisiones aplicadas a su finalidad	13.194.086.683
Transferencias corrientes	184.091.122.933		
Transferencias de capital	55.870.191.048		
Dotación amortización y provisiones	52.497.181.667		
Otros cargos	775.000.000		
SALDO ACREEDOR	34.956.595.779		
TOTAL	1.395.701.998.342	TOTAL	1.395.701.998.342

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS			
DEBE		**HABER**	
Perdidas en enajenación inmovilizado	81.703.606	Por incumplimiento de obligaciones afianzadas	1.705.544
Pérdidas extra. en bienes inmovilizado	116.729.590	Beneficios enajenación inmovilizado	1.701.053.212
Por incumplimiento de obligaciones afianzadas	194.395.687	Otros abonos	44.814.700.572
Otros cargos	2.935.050.405		
SALDO ACREEDOR	43.189.580.040		
TOTAL	46.517.459.328	TOTAL	46.517.459.328

ANEXO I-15.2/2
EJERCICIO 1990

ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS

CUENTAS DE RESULTADOS (en pesetas)

RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES			
DEBE		HABER	
Resultados negativos en la enajenación de acciones	2.717.447.858	Por los de carácter positivo en operaciones de enajenación	5.022.627.672
Otros cargos	146.000.000		
SALDO ACREEDOR	2.159.179.814		
TOTAL	5.022.627.672	TOTAL	5.022.627.672

MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
DEBE		HABER	
Modificación de derechos de ejercicios anteriores	2.186.956.099	Modificación de derechos de ejercicios anteriores	41.315.087
Modificación de obligaciones de ejercicios anteriores	792.492.147	Modificación de obligaciones de ejercicios anteriores	369.605.175
		SALDO DEUDOR	2.568.527.984
TOTAL	2.979.448.246	TOTAL	2.979.448.246

RESULTADOS DEL EJERCICIO			
DEBE		HABER	
Modificación de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores	2.568.527.984	Resultados corrientes del ejercicio	34.956.595.779
otros cargos	1.018.085.079	Resultados extraordinarios	43.189.580.040
		Resultados cartera de valores	2.159.179.814
SALDO ACREEDOR	76.718.742.570		
TOTAL	80.305.355.633	TOTAL	80.305.355.633

ANEXO I.16
EJERCICIO 1990

ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS

ESTADO COMPARATIVO ENTRE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CUENTA DE RESULTADOS Y LOS CORRELATIVOS DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA, DEL BALANCE Y DEL ANEXO DE OPERACIONES COMERCIALES (en pesetas).

DEBE		S/RDOS. CORRIENTES	S/LIQ. PTO. Y BALANCE Y ANEXO OP. COMERC.	DIFERENCIAS
30/39	Existencias iniciales (1)	(37.295.786.761)	85.903.776.329	(123.199.563.090)
60	Compras netas	535.731.351.156	682.366.007.967	(146.634.656.811)
61+65	G. Personal y Prest. soc.	126.059.179.067	124.931.495.162	1.127.683.905
62	Gastos Financieros	67.194.166.398	3.189.273.042	64.004.893.356
63+64	Trab. S. y S. ext. y Tributos	99.990.618.694	19.798.257.350	80.192.361.344
66+67	Tranf. ctes. y sub. explot.	459.359.389.011	478.472.882.165	(19.113.493.154)
68	Transferencias de Capital	55.870.191.048	62.518.284.379	(6.648.093.331)
69	Dot. Amortiz. y Provisiones	52.497.181.667	N/A	N/A
	Otros Cargos	775.000.000		775.000.000
	SALDO ACREEDOR	34.956.595.779		
	T O T A L	1.395.137.886.059	1.457.179.976.394	(149.495.867.781)

HABER		S/RDOS. CORRIENTES	S/LIQ. PTO. Y BALANCE Y ANEXO OP. COMERC.	DIFERENCIAS
30/39	Existencias finales (1)	(20.819.159.594)	102.311.711.436	(123.130.871.030)
70+71+72	Ventas+R.Prop.+ Trib.lig. a prod.	994.411.681.912	1.000.803.661.480	(6.391.979.568)
75+76	Sub. Explot. y Transf. ctes.	398.631.399.345	399.506.364.300	(874.964.955)
78	Otros ingresos	9.719.877.713	3.246.785.334	6.473.092.379
79	Provisiones aplicadas	13.194.086.683	N/A	N/A
	T O T A L	1.395.137.886.059	1.505.868.522.550	(123.924.723.174)

(1) Las existencias se presentan compensadas con las correspondientes provisiones.

ANEXO I-17
1990

ORGANISMOS AUTÓNOMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS ANUALES AGREGADOS

		SITUACIÓN CUENTAS A 26/11/92		DEFECTOS QUE IMPIDEN LA INCLUSIÓN EN ESTADOS ANUALES AGREGADOS (según la IGAE)			
		REMITIDAS	NO REMITIDAS	SIN SOLVENTAR DEFECTOS 89	CUENTA NO RENDIDA	DEFECTOS FORMALES	SIN SOLVENTAR REPAROS IGAE
	ADMINISTRATIVOS						
1)	AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	X		X			
2)	INST. NAL. SEMILLAS Y PL. VIVERO	X			X		
3)	MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL	X					X
4)	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MDEZ.PELAYO	X					X
	COMERC, INDUST, FINANC Y ANÁLOGOS						
1)	TRABAJOS PENITENCIARIOS		X	X	X		
2)	PATRON. CASAS MILITARES (EJER.)	X		X			
3)	PATRONATO DE CASAS (AIRE)	X		X			
4)	JUNTA PUERTO DE ALGECIRAS	X		X	X		
5)	JUNTA PUERTO DE ALICANTE		X	X	X		
6)	JUNTA PUERTO DE MELILLA		X	X			
7)	JUNTA PUERTO DE PASAJES	X		X			
8)	JUNTA PUERTO DE SANTANDER		X	X			
9)	JUNTA PUERTO DE TARRAGONA		X	X			
10)	CONF. HIDROGRÁF. DEL DUERO	X		X			
11)	AGENCIA NACIONAL DEL TABACO		X		X		
12)	INST. NAL. INVESTIGACIONES AGRARIAS		X		X		
13)	ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL	X				X	
14)	ADMINIST. TURÍSTICA ESPAÑOLA		X		X		
15)	INST. NAL. ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA	X			X		
	TOTAL	**11**	**8**				

ANEXO I-18
1990

ORGANISMOS AUTÓNOMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS AGREGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO ANALIZADOS EN EL INFORME ANUAL DE 1989

	SITUACIÓN CUENTAS EJERCICIO 1.989			SITUACIÓN CUENTAS EJERCICIO 1.988			SITUACIÓN CUENTAS EJERCICIO 1.987		
	PENDIENTES A 26/06/91	FECHA REMISIÓN	NO REMITIDAS	PENDIENTES A 26/06/91	FECHA REMISIÓN	NO REMITIDAS	PENDIENTES A 26/06/91	FECHA REMISION	NO REMITIDAS
ADMINISTRATIVOS									
1) AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	X	27/03/92							
2) INST. COOPERACIÓN IBEROAMERICANA				X	27/09/91				
COMER.INDUST.FINANC.Y ANÁLOGOS									
1) TRABAJOS PENITENCIARIOS	X		X	X	31/07/92		X	19/07/91	
2) PATRON.CASAS MILITARES (EJÉR.)	X	31/07/92		X	25/02/92				
3) PATRONATO DE CASAS (AIRE)	X	14/04/92		X	28/02/92				
4) JUNTA PUERTO DE ALGECIRAS	X	09/06/92							
5) JUNTA PUERTO DE ALICANTE	X	06/04/92		X	15/07/91				
6) JUNTA PUERTO Y RÍA DE AVILÉS	X	26/07/91							
7) JUNTA PUERTO DE MELILLA	X		X	X	28/07/92			11/05/92	
8) JUNTA PUERTO DE PASAJES	X		X	X	14/05/92				
9) JUNTA PUERTO DE SANTANDER	X		X	X	08/04/92				
10) JUNTA PUERTO DE TARRAGONA	X	06/04/92		X	28/10/91				
11) CONF.HIDROGRÁF. DEL DUERO	X	02/03/92		X	02/12/91				
12) AGENCIA NACIONAL DEL TABACO	X	08/10/91							
13) ADMINIST.TURÍSTICA ESPAÑOLA	X	15/10/91							
TOTAL	**14**	**10**	**4**	**10**	**10**		**2**	**2**	**0**

II. Análisis de la liquidación de los Presupuestos del Estado y sus Organismos

ANEXO II-1

EJERCICIO 1.990

MODIFICACIONES DE CREDITO DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. CLASIFICACION ORGANICO-ECONOMICA (en millones de pesetas y %)

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES				MODIFICACIONES NETAS							
					ABSOLUTAS				RELATIVAS			
	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.129.996	120.937	124.579	2.375.512	76.235	3.016	7.631	86.882	4	2	6	4
2.- GAST. B. CTES. Y SERV.	332.156	125.933	24.519	482.609	57.075	5.695	1.735	64.506	17	5	7	13
3.- GASTOS FINANCIEROS	1.454.205	4.277	6.487	1.464.969	96.746	81	5	96.831	7	2	0	7
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.435.592	1.465.007	451.508	7.352.108	212.817	7.866	63.529	284.212	4	1	14	4
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.351.949	1.716.155	607.094	11.675.197	442.873	16.658	72.901	532.432	5	1	12	5
6.- INVERSIONES REALES	1.049.210	188.494	108.929	1.346.632	126.988	59.459	8.293	194.741	12	32	8	14
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.017.295	36.146	61.817	1.115.258	223.846	22.539	6.732	253.117	22	62	11	23
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.066.504	224.640	170.746	2.461.890	350.834	81.998	15.025	447.858	17	37	9	18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.418.453	1.940.795	777.840	14.137.087	793.707	98.656	87.926	980.289	7	5	11	7
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	313.551	27.008	3.110	343.669	14.609	186	868	15.664	5	1	28	5
9.- PASIVOS FINANCIEROS	962.505	3.782	30.932	997.219	2.364.022	0	(73)*	2.363.949	246	0	-0	237
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.276.056	30.790	34.042	1.340.888	2.378.631	187	795	2.379.613	186	1	2	177
TOTAL	12.694.509	1.971.585	811.882	15.477.975	3.172.338	98.843	88.721	3.359.902	25	5	11	22

ANEXO II·2

EJERCICIO 1990

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. CLASIFICACION ORGANICO-ECONOMICA (en millones de pesetas y %)

GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS FINALES				OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1990				OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1989				DESVIACIONES R.				VARIACIONES R.			
	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	EST	OAA	OAC	TOT	EST.	OAA	OAC.	TOT
GASTOS DE PERSONAL	2.206.230	123.953	132.211	2.462.394	2.153.811	113.290	122.012	2.389.113	1.920.492	91.791	106.682	2.118.965	2	9	8	3	12	23	14	13
GAST.B.CIES.Y SERV.	389.232	131.628	26.255	547.115	336.304	122.197	22.717	481.218	341.434	111.083	20.556	473.073	14	7	13	12	(2)	10	11	2
GASTOS FINANCIEROS	1.550.951	4.357	6.492	1.561.800	1.473.350	3.903	3.189	1.480.442	1.326.363	3.476	5.699	1.335.538	5	10	51	5	11	12	(44)	11
TRANSF.CORRIENTES	5.648.409	1 472 873	515.037	7.636.319	5.542.666	1.391.954	478.473	7.413.092	5.060.206	1.227.305	396.405	6.683.916	2	5	7	3	10	13	21	11
TOTAL OPER.CORR.	9.794.822	1.732.813	679.994	12.207.629	9.506.130	1.631.344	626.392	11.763.866	8.648.495	1.433.655	529.342	10.611.492	3	6	8	4	10	14	18	11
INVERSIONES REALES	1.176.198	247.953	117.222	1.541.373	944.432	163.006	93.492	1.200.930	789.685	117.181	74.211	981.077	20	34	20	22	20	39	26	22
TRANSF.DE CAP.	1.241.140	58.685	68.549	1.368.375	1.091.216	41.424	62.518	1.195.158	991.138	36.205	43.943	1.071.286	12	29	9	13	10	14	42	12
TOTAL OPER.DE CAP.	2.417.338	306.639	185.771	2.909.748	2.035.648	204.430	156.010	2.396.088	1.780.823	153.386	118.154	2.052.363	16	33	16	18	14	33	32	17
TOTAL OP.NO FINAN.	12.212.160	2.039.451	865.766	15.117.377	11.541.778	1.835.774	782.402	14.159.954	10.429.317	1.587.042	647.496	12.663.855	5	10	10	6	11	16	21	12
ACTIVOS FINAN.	328.160	27.194	3.979	359.333	185.683	12.977	3.865	202.524	434.824	30.779	50.560	516.163	43	52	3	44	(57)	(58)	(92)	(61
PASIVOS FINAN.	3.326.527	3.782	30.859	3.361.168	1.935.252	3.780	15.943	1.954.975	2.374.587	4.151	119.634	2.498.372	42	0	48	42	(19)	(9)	(87)	(22
TOTAL OPER.FINAN.	3.654.687	30.977	34.837	3.720.501	2.120.935	16.757	19.808	2.157.499	2.809.410	34.930	170.194	3.014.535	42	46	43	42	(25)	(52)	(88)	(28
TOTAL	15.866.847	2.070.428	900.603	18.837.877	13.662.712	1.852.531	802.210	16.317.453	13.238.728	1.621.972	817.690	15.678.389	14	11	11	13	3	14	(2)	4

ANEXO II-2.1

EJERCICIO 1990

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO . CLASIFICACION ECONOMICA (en millones de pesetas y %)

GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1990	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1989	DESVIACIONES ABSOLUTAS	DESVIACIONES RELATIVAS	VARIACIONES ABSOLUTAS	VARIACIONES RELATIVAS
GASTOS DE PERSONAL	2.206.230	2.153.811	1.920.492	52.420	2	233.319	12
GAST.B.CTES.Y SERV.	389.232	336.304	341.434	52.928	14	(5.130)	(2)
GASTOS FINANCIEROS	1.550.951	1.473.350	1.326.363	77.601	5	146.986	11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.648.409	5.542.666	5.060.206	105.743	2	482.460	10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.794.822	9.506.130	8.648.495	288.692	3	857.635	10
INVERSIONES REALES	1.176.198	944.432	789.685	231.766	20	154.747	20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.241.140	1.091.216	991.138	149.924	12	100.078	10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.417.338	2.035.648	1.780.823	381.690	16	254.825	14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.212.160	11.541.778	10.429.317	670.382	5	1.112.460	11
ACTIVOS FINANCIEROS	328.160	185.683	434.824	142.477	43	(249.141)	(57)
PASIVOS FINANCIEROS	3.326.527	1.935.252	2.374.587	1.391.275	42	(439.335)	(19)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.654.687	2.120.935	2.809.410	1.533.752	42	(688.476)	(25)
TOTAL	15.866.847	13.662.712	13.238.728	2.204.135	14	423.985	3

ANEXO II-2.2

EJERCICIO 1990

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ORGANICA (en millones de pesetas y %)

GASTOS

SECCIONES PRESUPUESTARIAS	CREDITOS FINALES (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (2)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1989 (3)	DESVIACIONES ABSOLUTAS (4)=(1)-(2) (4)	DESVIACIONES RELATIVAS (5)=(4)/(1) (5)	VARIACIONES ABSOLUTAS (6)=(2)-(3) (6)	VARIACIONES RELATIVAS (6)/(3) (7)
01.- CASA DE SU MAJESTAD EL REY	801	801	752	0	0	49	7
02.- CORTES GENERALES	12.818	12.818	11.496	0	0	1.322	11
03.- TRIBUNAL DE CUENTAS	2.754	2.471	1.804	284	10	667	37
04.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.146	1.000	1.005	146	13	(5)	(0)
05.- CONSEJO DE ESTADO	610	540	461	70	11	79	17
06.- DEUDA PUBLICA	4.804.176	3.336.117	3.656.928	1.468.060	31	(320.812)	(9)
07.- CLASES PASIVAS	562.836	550.965	481.230	11.871	2	69.735	14
08.- CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL	1.533	1.333	1.188	200	13	144	12
12.- MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES	75.281	69.511	56.184	5.770	8	13.327	24
13.- MINISTERIO DE JUSTICIA	198.992	181.350	147.707	17.642	9	33.643	23
14.- MINISTERIO DE DEFENSA	950.736	819.751	826.121	130.985	14	(6.370)	(1)
15.- MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	456.630	394.521	309.066	62.109	14	85.455	28
16.- MINISTERIO DEL INTERIOR	453.660	429.944	412.325	23.716	5	17.619	4
17.- MINIST.OBRAS PUBLICAS Y URBAN.	680.885	615.045	470.862	65.840	10	144.183	31
18.- MINISTERIO EDUCACION Y CIENCIA	994.894	987.766	852.588	7.128	1	135.178	16
19.- MINISTERIO TRABAJO Y SEG.SOC.	1.043.573	1.027.075	1.063.267	16.498	2	(36.192)	(3)
20.- MINISTERIO INDUSTRIA Y ENERGIA	216.901	200.007	240.824	16.894	8	(40.817)	(17)
21.- MINIST.AGRICULTURA, P.Y ALIM.	255.921	247.479	160.624	8.442	3	86.855	54
22.- MINISTERIO ADMINISTRAC.PUBLIC.	52.255	39.544	29.187	12.711	24	10.357	35
23.- MINIST.TRANSPORT.TURISMO Y COM.	650.991	606.912	604.683	44.079	7	2.229	0
24.- MINISTERIO DE CULTURA	60.741	56.041	41.368	4.700	8	14.674	35
25.- MINIST.RELAC.CORTES Y SEC.GOB.	23.401	19.847	25.311	3.554	15	(5.465)	(22)
26.- MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO	1.430.079	1.424.638	1.213.952	5.441	0	210.686	17
27.- MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES	37.733	34.697	29.718	3.037	8	4.978	17
28.- MINISTERIO PORTAVOZ DEL GOBIERNO	1.907	1.734	1.503	174	9	231	15
31.- GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	276.693	139.469	422.873	137.225	50	(283.404)	(67)
32.- ENTES TERRITORIALES	1.873.490	1.859.063	1.653.326	14.427	1	205.737	12
33.- FONDO COMPENSACION INTERTERRIT.	361.753	269.620	230.812	92.133	25	38.808	17
34.- RELACIONES FINANCIERAS CON C.E.E.	383.653	332.654	291.562	50.999	13	41.093	14
TOTAL	15.866.847	13.662.712	13.238.728	2.204.135	14	423.985	3

ANEXO II-2.3

EJERCICIO 1990

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (en millones de pesetas y %)

GASTOS

SECCION	ORGANISMO	CREDITOS FINALES (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (2)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 1989 (3)	DESVIACIONES ABSOLUTAS (4)=(1)-(2) (4)	DESVIACIONES RELATIVAS (5)=(4)/(1) (5)	VARIACIONES ABSOLUTAS (6)=(2)-(3) (6)	VARIACIONES RELATIVAS (7)=(6)/(3) (7)
13.-	CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES	1.024	872	722	151	15	150	21
14.-	FONDO CENTR.ATENC.GLES.DEFENSA	2.981	1.205	2.146	1.776	60	(941)	(44)
14.-	FONDO EXPL.SERV.CRIA CABALL.RE.	253	212	208	41	16	5	2
14.-	MUSEO DEL EJERCITO	178	177	144	1	1	33	23
14.-	GERENCIA INFRAEST.DE DEFENSA	23.162	8.255	10.783	14.907	64	(2.528)	(23)
14.-	F.AT.GLES.SERV.GEOGRAF.EJERCITO	135	115	123	20	15	(7)	(6)
14.-	CANAL EXP.HIDRODINAM.EL PARDO	731	582	618	149	20	(36)	(6)
14.-	INST.SOCIAL DE LAS FF.AA.	38.202	37.104	29.794	1.098	3	7.310	25
15.-	CENTRO GESTION Y COOP.TRIBUT.	47.032	30.963	23.760	16.069	34	7.203	30
15.-	SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA	9.669	8.380	6.896	1.289	13	1.484	22
15.-	INST.CONTABILIAD Y AUDITORIA	491	257	217	233	48	40	19
15.-	ESCUELA DE HACIENDA PUBLICA	2.249	1.674	668	575	26	1.006	151
15.-	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	16.688	15.129	0	1.558	9	15.129	--
16.-	JEFATURA DE TRAFICO	43.232	33.865	33.830	9.367	22	35	0
18.-	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	35.613	25.859	21.082	9.753	27	4.777	23
18.-	JUNTA DE CONSTRUC.INSTALAC.Y EQ.ESC.	96.565	62.999	58.976	33.566	35	4.024	7
19.-	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	1.441.456	1.370.632	1.176.129	70.822	5	194.502	17
19.-	FONDO DE GARANTIA SALARIAL	76.669	57.191	72.436	19.478	25	(15.246)	(21)
19.-	INST.NAL. HIGIENE Y S. TRABAJO	6.660	5.727	4.613	933	14	1.114	24
20.-	REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.006	3.674	2.465	1.332	27	1.209	49
20.-	INST.P.Y M.EMPRESA INDUSTRIAL	1.916	1.760	1.594	155	8	166	10
21.-	SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA	11.536	7.880	3.539	3.656	32	4.341	123
21.-	INST.RELAC.AGRARIAS (I.R.A.)	14.747	12.642	12.795	2.105	14	(153)	(1)
21.-	INST.NAL.REFORMA Y D. AGRARIO	86.083	71.855	63.983	14.229	17	7.871	12
21.-	AGENCIA PARA EL ACEITE OLIVA	592	351	525	241	41	(174)	(33)
22.-	INST.NAL.ADMINISTRAC.PUBLICAS	2.962	2.180	1.899	782	26	281	15
22.-	MUTUALIDAD GRAL.FUNC.CIV.ESTADO	89.670	78.998	82.812	10.672	12	(3.814)	(5)
23.-	ESCUELA OFICIAL DE TURISMO	228	203	177	25	11	26	15
24.-	INST.CINEMAT.Y ARTES AUDIOV.	7.282	5.137	3.528	2.145	29	1.609	46
24.-	MUSEO NACIONAL DEL PRADO	2.601	2.326	2.260	274	11	67	3
25.-	CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCIONALES	507	393	369	114	22	24	7
26.-	INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO	2.235	1.960	1.638	275	12	322	20
27.-	INSTITUTO DE LA MUJER	2.076	1.973	1.244	104	5	728	59
	TOTAL	2.070.428	1.852.531	1.621.972	217.896	11	230.559	14

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS (en millones de pesetas y %)

ANEXO II.2.4/EJER.1990

SECCION	ORGANISMO	CREDITOS FINALES (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (2)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 1989 (3)	DESVIACIONES ABSOLUTAS (4)=(1)-(2) (4)	DESVIACIONES RELATIVAS (5)=(4)/(1) (5)	VARIACIONES ABSOLUTAS (6) =(2)-(3) (6)	VARIACIONES RELATIVAS (7)=(6)/(3) (7)
14 .-	PATRON.CASAS ARMADA (MARINA)	2.213	2.164	2.350	48	2	(186)	(8)
14 .-	SERVICIO MILITAR CONSTRUCCION.	1.435	828	734	607	42	94	13
14 .-	INST.N.TECN.AEROESP.E.TERRADAS	10.100	8.491	5.355	1.609	16	3.136	59
15 .-	PARQUE MOVIL MINISTERIAL	11.339	11.146	9.015	193	2	2.131	24
15 .-	ORG.NAL.LOTERIAS Y AP.ESTADO	215.360	186.778	172.464	28.581	13	14.314	8
15 .-	CONSORCIO COMPENSACION SEGUROS	10.868	8.199	54.595	2.669	25	(46.395)	(85)
16 .-	PATRON.VIVIENDAS GUARDIA CIVIL	1.337	689	1.043	648	48	(354)	(34)
17 .-	JUNTA PUERTO DE ALMERIA	1.041	1.033	867	8	1	166	19
17 .-	JUNTA DEL PUERTO DE GIJON	4.230	3.986	3.876	244	6	110	3
17 .-	JUNTA DEL PUERTO Y RIA DE AVILES	1.537	1.458	1.175	79	5	283	24
17 .-	JUNTA PUERTO BAHIA DE CADIZ	3.085	3.029	2.315	56	2	715	31
17 .-	JUNTA DEL PUERTO DE CARTAGENA	2.087	2.032	1.747	55	3	285	16
17 .-	JUNTA PUERTO DE CASTELLON	1.030	985	905	45	4	80	9
17 .-	JUNTA PUERTO DE CEUTA	1.234	1.177	871	57	5	306	35
17 .-	JUNTA PUERTO DE LA CORUÑA	2.694	2.650	2.041	44	2	609	30
17 .-	JUNTA PUERTO DE EL FERROL	1.138	989	610	148	13	379	62
17 .-	JUNTA PTO. LA LUZ Y LAS PALMAS	4.017	3.868	3.497	150	4	370	11
17 .-	JUNTA PUERTO DE MALAGA	1.507	1.479	1.555	28	2	(76)	(5)
17 .-	JUNTA PUERTO DE PALMA MALLORCA	2.068	1.989	1.859	79	4	131	7
17 .-	JUNTA PUERTO DE STA. CRUZ DE TEN.	2.717	2.675	2.648	42	2	27	1
17 .-	JUNTA PTO.SEVILLA Y RIA GUADAL.	4.060	3.111	3.148	949	23	(37)	(1)
17 .-	JUNTA PUERTO Y RIA DE VIGO	2.123	2.074	1.767	49	2	307	17
17 .-	JUNTA PUERTO Y RIA PONTEVEDRA	699	671	526	28	4	145	28
17 .-	JUNTA PUERTO VILLAGARCIA AROSA	393	364	415	29	7	(51)	(12)
17 .-	COMISION ADMVA.GRUPOS PUERTOS	8.344	7.263	6.177	1.081	13	1.086	18
17 .-	CONF.HIDROGRAF. DEL EBRO	4.149	3.411	3.001	738	18	410	14
17 .-	CONF.HIDROGRAF.DEL SUR DE ESP.	2.142	1.934	1.772	208	10	162	9
17 .-	CONF.HIDROGRAF. GUADALQUIVIR	4.733	3.558	4.106	1.175	25	(547)	(13)
17 .-	CONF.HIDROGRAF. DEL GUADIANA	3.055	2.538	2.106	517	17	432	21
17 .-	CONF.HIDROGRAF. DEL JUCAR	1.840	1.479	1.201	361	20	278	23
17 .-	CONF.HIDROGRAF. DEL SEGURA	4.034	3.170	3.199	864	21	(29)	(1)
17 .-	CONF.HIDROGRA.DEL NORTE DE ESPAÑA	2.107	1.885	1.441	223	11	443	31
17 .-	CONF.HIDROGRAF. DEL TAJO	3.552	2.272	2.201	1.280	36	71	3
17 .-	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	2.390	2.255	1.984	135	6	271	14
17 .-	PARQUE DE MAQUINARIA	1.503	1.406	1.169	97	6	237	20
17 .-	CENTRO ESTUDIOS Y EXP.OO.PBCAS.	4.826	4.624	3.572	202	4	1.052	29
17 .-	CENTRO NACIONAL DE INFORMACION	439	20	0	419	95	20	...
18 .-	CONSEJO SUP. INVEST.CIENTIFIC.	33.163	32.896	26.940	267	1	5.957	22
18 .-	INST. ASTROFISICA DE CANARIAS	1.337	1.108	789	229	17	319	40
20 .-	C.INVEST.ENERG.MED.Y TECNOLOG.	7.983	7.583	7.188	401	5	395	5
20 .-	INST.GEOLOG.Y MINERO DE ESPAÑA	5.524	5.325	4.334	199	4	992	23
21 .-	SERV.NAL.PRODUC.AGRAR.(SENPA)	28.976	12.227	23.906	16.749	58	(11.679)	(49)
21 .-	INST.CONSER.NATURALEZA (ICONA)	39.687	31.283	19.774	8.404	21	11.509	58
21 .-	FONDO ORD.REGUL.PROD.y PREC.AGR	308.351	297.818	324.744	10.533	3	(26.926)	(8)
21 .-	ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR.	12.609	11.474	9.663	1.134	9	1.812	19
21 .-	F.REG.ORG.MERC.PR.PESCA Y C.M.	1.755	1.368	1.645	387	22	(277)	(17)
21 .-	INSTITUTO ESPAÑOL OCEANOGRAFIA	2.949	2.379	2.274	571	19	105	5
23 .-	CAJA POSTAL DE AHORROS	25.061	18.914	18.958	6.147	25	(44)	(0)
23 .-	AEROPUERTOS NACIONALES	77.969	70.426	50.355	7.543	10	20.071	40
23 .-	INST.NAL.PROMOCION DEL TURISMO	7.120	6.722	5.596	397	6	1.127	20
25 .-	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	3.439	2.484	2.782	955	28	(298)	(11)
26 .-	INSTITUTO SALUD CARLOS III	9.549	8.928	8.324	621	7	604	7
27 .-	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	3.703	3.593	2.811	111	3	781	28
	TOTAL	900.603	802.210	817.390	98.393	11	(15.180)	(2)

ANEXO II-3
1990

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. CLASIFICACIÓN ORGÁNICO-ECONÓMICA

(en millones de pesetas y %)

INGRESOS

	PREVISIONES FINALES (1)				DERECHOS RECONOCIDOS 1990				DERECHOS RECONOCIDOS 1989				DESVIACIONES R.				VARIACIONES R.			
CAPÍTULOS	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	EST.	OAA	OAC.	TOT.	EST.	OAA	OAC.	TOT.
IMPUESTOS DIRECTOS	4.880.000	931.765	--	5.811.765	5.137.372	1.076.898	--	6.214.270	4.724.703	909.033	--	5.633.737	(5)	(16)	N/A	(7)	9	18	N/A	10
IMPUESTOS INDIRECT.	4.413.000	--	--	4.413.000	4.075.685	--	--	4.075.685	3.829.552	--	--	3.829.552	8	N/A	N/A	8	6	N/A	N/A	6
TASAS Y OTROS INGR.	357.000	61.406	10.751	429.156	320.394	69.856	17.619	407.869	304.470	50.355	15.491	370.316	10	(14)	(64)	5	5	39	14	10
TRANSF.CORRIENTES	456.260	590.789	395.285	1.442.334	359.690	590.480	399.506	1.349.676	341.568	577.933	306.121	1.225.623	21	0	(1)	6	5	2	31	10
INGS. PATRIMONIALES	289.341	8.058	5.935	303.333	321.092	9.652	7.548	338.292	277.119	8.239	7.156	292.513	(11)	(20)	(27)	(12)	16	17	5	16
TOTAL OPER.CORR.	10.395.600	1.592.018	411.970	12.399.588	10.214.234	1.746.885	424.673	12.385.793	9.477.412	1.545.559	328.768	11.351.740	2	(10)	(3)	0	8	13	29	9
ENAJ.INVER.REALES	30.000	20.892	661	51.553	30.796	12.316	1.245	44.357	2.386	4.837	965	8.188	(3)	41	(89)	14	1.190	155	29	442
TRANSF.CAPITAL	136.400	272.408	72.861	481.669	143.029	269.714	71.924	484.666	240.335	200.551	57.722	498.607	(5)	1	1	(1)	(40)	34	25	(3)
TOTAL OPER.CAPITAL	166.400	293.300	73.522	533.222	173.824	282.030	73.169	529.024	242.721	205.387	58.687	505.795	(4)	4	0	1	(28)	37	25	4
TOTAL OPER.NO FINAN.	10.562.000	1.885.318	485.492	12.932.810	10.388.058	2.028.916	497.842	12.914.816	9.720.133	1.750.947	387.455	11.858.535	2	(8)	(3)	0	7	16	28	9
ACTIVOS FINAN.	124.980	13.400	730	139.109	23.544	12.202	730	36.475	135.228	12.930	2.941	151.099	81	9	0	74	(83)	(6)	(75)	(76)
PASIVOS FINAN.	--	4.000	43.067	47.067	4.591.407	4.014	27.496	4.622.916	3.326.863	8.000	147.677	3.482.540	N/A	0	36	(9.722)	38	(50)	(81)	33
TOTAL OPER.FINAN.	124.980	17.400	43.797	186.176	4.614.951	16.215	28.226	4.659.392	3.462.090	20.930	150.618	3.633.639	(3.593)	7	36	(2.403)	33	(23)	(81)	28
TOTAL	10.686.980	1.902.718	529.289	13.118.987	15.003.009	2.045.131	526.068	17.574.208	13.182.223	1.771.877	538.073	15.492.174	(40)	(7)	1	(34)	14	15	(2)	13

(1). No incluye las previsiones de remanente de tesorería, operaciones comerciales y fondo de maniobra.

ANEXO II-3.1

EJERCICIO 1990

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS. CLASIFICACION ECONOMICA (en millones de pesetas y %)

INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCIDOS 1990	DERECHOS RECONOCIDOS 1989	DESVIACIONES ABSOLUTAS	DESVIACIONES RELATIVAS	VARIACIONES ABSOLUTAS	VARIACIONES RELATIVAS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	925.732	6.033	931.765	1.076.898	909.033	(145.133)	(16)	167.865	18
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	-	0	-
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	61.053	353	61.406	69.856	50.355	(8.450)	(14)	19.501	39
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	589.736	1.053	590.789	590.480	577.933	309	0	12.547	2
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	8.058	0	8.058	9.652	8.239	(1.594)	(20)	1.413	17
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.584.578	7.439	1.592.018	1.746.885	1.545.559	(154.868)	(10)	201.326	13
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	20.892	0	20.892	12.316	4.837	8.576	41	7.479	155
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	247.843	24.565	272.408	269.714	200.551	2.694	1	69.164	34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	268.735	24.565	293.300	282.030	205.387	11.270	4	76.643	37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.853.314	32.004	1.885.318	2.028.916	1.750.947	(143.598)	(8)	277.969	16
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	13.313 *	87 *	13.400 *	12.202	12.930	1.198	9	(729)	(6)
9.- PASIVOS FINANCIEROS	4.000	0	4.000	4.014	8.000	(14)	(0)	(3.986)	(50)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.313	87	17.400	16.215	20.930	1.184	7	(4.715)	(23)
TOTAL	1.870.627	32.091	1.902.718	2.045.131	1.771.877	(142.414)	(7)	273.254	15

(*). No incluye las previsiones de remanente de tesorería.

ANEXO II-3.2

EJERCICIO 1990

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS COMERCIALES. CLASIFICACION ECONOMICA (en millones de pesetas y %)

INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCIDOS 1990	DERECHOS RECONOCIDOS 1989	DESVIACIONES ABSOLUTAS	DESVIACIONES RELATIVAS	VARIACIONES ABSOLUTAS	VARIACIONES RELATIVAS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	-	0	-
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	-	0	-
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	10.603	148	10.751	17.619	15.491	(6.869)	(64)	2.128	14
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318.701	76.584	395.285	399.506	306.121	(4.222)	(1)	93.385	31
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	5.935 *	0	5.935 *	7.548	7.156	(1.613)	(27)	392	5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	335.238	76.732	411.970	424.673	328.768	(12.703)	(3)	95.905	29
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	661	0	661	1.245	965	(585)	(89)	281	29
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.060	2.801	72.861	71.924	57.722	938	1	14.202	25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.721	2.801	73.522	73.169	58.687	353	0	14.482	25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	405.959	79.533	485.492	497.842	387.455	(12.351)	(3)	110.388	28
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	730	0	730	730	2.941	(0)	(0)	(2.211)	(75)
9.- PASIVOS FINANCIEROS	43.067	0	43.067	27.496	147.677	15.571	36	(120.181)	(81)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.797	0	43.797	28.226	150.618	15.571	36	(122.393)	(81)
TOTAL	449.756	79.533	529.289	526.068	538.073	3.220	1	(12.005)	(2)

(*). No incluye el resultado de las operaciones comerciales ni la variación del fondo de maniobra.

ANEXO II-5.3

EJERCICIO 1990

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (en millones de pesetas y %)

INGRESOS

SEC	ORGANISMO	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	PREVISIONES REMANENTE TESORERIA (2)	DERECHOS RECONOCIDOS (3)	DERECHOS RECONOCIDOS EN 1989 (4)	DESVIACIONES EXCESO DE PREVISIONES (5)	DESVIACIONES EXCESO DE DERECHOS (6)	DESVIACIONES RELATIVAS (5-6)/(1-2) (7)	VARIACIONES ABSOLUTAS (3)-(4) (8)	VARIACIONES RELATIVAS (8)/(4) (9)
13	CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES	1.024	63	961	891	0	0	(0)	71	8
14	FONDO CENTR.ATENC.GLES.DEFENSA	2.981	0	3.364	3.220	1.363	1.746	(13)	144	4
14	FONDO EXPL.SERV.CRIA CABALL.RE.	253	2	268	183	0	17	(7)	85	47
14	MUSEO DEL EJERCITO	178	31	148	146	0	2	(1)	2	1
14	GERENCIA INFRAEST.DE DEFENSA	23.162	2.263	12.602	4.727	0.398	102	40	7.875	167
14	F.AT.GLES.SERV.GEOGRAF.EJERCIT	135	0	158	129	1	24	(17)	29	22
14	CANAL EXP.HIDRODINAM.EL PARDO	731	81	659	608	0	9	(1)	51	8
14	INST.SOCIAL DE LAS FF.AA.	38.202	8.681	40.488	36.184	156	11.123	(37)	4.303	12
15	CENTRO GESTION Y COOP.TRIBUT.	47.032	17.217	31.077	25.849	22	1.284	(4)	5.228	20
15	SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA	9.669	966	8.701	7.077	14	13	0	1.624	23
15	INST.CONTABILIAD Y AUDITORIA	491	34	479	296	2	25	(5)	183	62
15	ESCUELA DE HACIENDA PUBLICA	2.249	0	1.908	831	382	41	15	1.077	130
15	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	16.688	0	16.762	0	4	78	(0)	16.762	-
16	JEFATURA DE TRAFICO	43.232	4.295	37.829	32.462	1.349	241	3	5.367	17
18	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	35.613	5.814	29.978	24.282	279	458	(1)	5.696	23
18	JUNTA DE CONSTRUC.INSTAL.Y EQ.ESCOL.	96.565	26.790	69.821	64.647	1	47	(0)	5.174	8
19	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	1.441.454	58.176	1.534.030	1.347.462	3.322	154.074	(11)	186.568	14
19	FONDO DE GARANTIA SALARIAL	76.669	11.754	53.032	60.504	13.070	1.186	18	(7.472)	(12)
19	INST.NAL. HIGIENE Y S. TRABAJO	6.660	1.744	6.694	2.667	25	1.803	(36)	4.027	151
20	REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.006	1.880	2.979	2.897	217	70	5	82	3
20	INST.P.Y M.EMPRESA INDUSTRIAL	1.916	362	1.640	1.864	31	117	(6)	(224)	(12)
21	SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA	11.536	3.269	8.290	6.711	10	32	(0)	1.579	24
21	INST.RELAC.AGRARIAS (I.R.A.)	14.747	1.515	14.157	12.227	19	945	(7)	1.930	16
21	INST.NAL.REFORMA Y D. AGRARIO	86.083	7.249	79.579	54.181	128	873	(1)	25.398	47
21	AGENCIA PARA EL ACEITE OLIVA	592	11	581	744	0	0	0	(163)	(22)
22	INST.NAL.ADMINISTRAC.PUBLICAS	2.962	470	2.468	1.801	59	34	1	666	37
22	MUTUALIDAD GRAL.FUNC.CIV.ESTADO	89.670	13.208	73.184	68.589	4.076	798	4	4.595	7
23	ESCUELA OFICIAL DE TURISMO	228	17	246	205	0	35	(17)	41	20
24	INST.CINEMAT.Y ARTES AUDIOV.	7.282	1.384	6.006	4.943	4	110	(2)	1.062	21
24	MUSEO NACIONAL DEL PRADO	2.601	108	2.690	2.179	4	201	(8)	511	23
25	CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCIONALES	507	66	445	375	2	6	(1)	71	19
26	INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO	2.235	180	2.056	1.602	10	11	(0)	454	28
27	INSTITUTO DE LA MUJER	2.076	79	1.850	1.393	160	13	7	458	33
	TOTAL	2.070.428	167.710	2.045.131	1.771.877	33.105	175.519	(7)	273.254	15

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS (en millones de pesetas y %)

ANEXO II-3.4

EJERCICIO 1990

SECCION	ORGANISMO	PREVISIONES DEFINITIVAS	PREV.OPER.COM. Y FONDO DE MANIOBRA	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS EN 1989	DESVIACIONES EXCESO DE PREVISIONES	DESVIACIONES EXCESO DE DER. REC.	DESVIACIONES RELATIVAS (5-6)/(1-2)	VARIACIONES ABSOLUTAS (3)-(4)	VARIACIONES RELATIVAS (8)/(4)
14	PATRON.CASAS ARMADA (MARINA)	2.213	100	2.141	2.326	1	28	(1)	(185)	(8)
14	SERVICIO MILITAR CONSTRUCCIONES	1.435	1.018	380	94	340	303	9	286	304
14	INST.N.TECN.AEROESP.E.TERRADAS	10.100	2.781	7.349	4.552	0	31	(0)	2.798	61
15	PARQUE MOVIL MINISTERIAL	11.339	4.167	7.637	6.114	4	469	(6)	1.523	25
15	ORG.NAL.LOTERIAS Y AP.ESTADO	215.360	214.935	527	491	9	111	(24)	36	7
15	CONSORCIO COMPENSACION SEGUROS	10.868	12	11.429	63.492	969	1.543	(5)	(52.063)	(82)
16	PATRON.VIVIENDAS GUARDIA CIVIL	1.337	247	629	697	509	48	42	(68)	(10)
17	JUNTA PUERTO DE ALMERIA	1.041	639	420	44	1	19	(5)	376	860
17	JUNTA DEL PUERTO DE GIJON	4.230	2.645	1.626	1.729	12	53	(3)	(103)	(6)
17	JUNTA DEL PUERTO Y RIA DE AVILES	1.537	860	656	447	24	4	3	209	47
17	JUNTA PUERTO BAHIA DE CADIZ	3.085	847	2.183	901	102	46	2	1.282	142
17	JUNTO DEL PUERTO DE CARTAGENA	2.087	2.032	68	56	0	14	(24)	12	20
17	JUNTA PUERTO DE CASTELLON	1.030	877	187	489	2	36	(22)	(302)	(62)
17	JUNTA PUERTO DE CEUTA	1.234	637	607	212	1	10	(2)	395	187
17	JUNTA PUERTO DE LA CORUÑA	2.694	2.566	225	158	5	102	(76)	67	42
17	JUNTA PUERTO DE EL FERROL	1.138	277	863	289	0	3	(0)	574	199
17	JUNTA PTO. LA LUZ Y LAS PALMAS	4.017	3.687	436	411	16	122	(32)	26	6
17	JUNTA PUERTO DE MALAGA	1.507	1.283	255	129	7	39	(14)	127	98
17	JUNTA DEL PUERTO PALMA DE MALLORCA	2.068	1.732	312	580	47	23	7	(268)	(46)
17	JUNTA PUERTO STA.CRUZ TENERIFE	2.717	2.516	61	365	143	3	70	(304)	(83)
17	JUNTA PTO.SEVILLA Y RIA GUADAL.	4.060	1.282	3.026	1.873	23	271	(9)	1.154	62
17	JUNTA PUERTO Y RIA DE VIGO	2.123	1.792	261	165	104	33	21	96	58
17	JUNTA PUERTO Y RIA PONTEVEDRA	699	428	15	279	260	4	94	(263)	(94)
17	JUNTA PUERTO VILLAGARCIA AROSA	393	321	77	199	0	5	(6)	(122)	(61)
17	COMISION ADMVA.GRUPOS PUERTOS	8.344	621	6.701	5.582	1.030	8	13	1.119	20
17	CONF.HIDROGRAF. DEL EBRO	4.149	1.908	2.218	2.004	269	246	1	214	11
17	CONF.HIDROGRAF.DEL SUR DE ESPAÑA	2.142	913	1.695	1.680	44	510	(38)	15	1
17	CONF.HIDROGRAF. GUADALQUIVIR	4.733	3.265	2.188	1.718	283	1.002	(49)	470	27
17	CONF.HIDROGRAF. DEL GUADIANA	3.055	1.397	1.629	1.807	321	292	2	(178)	(10)
17	CONF.HIDROGRAF. DEL JUCAR	1.840	1.030	2.059	1.928	53	1.303	(154)	131	7
17	CONF.HIDROGRAF. DEL SEGURA	4.034	2.889	1.438	1.167	20	312	(26)	271	23
17	CONF.HIDROGRAF. NORTE DE ESP.	2.107	353	3.316	2.072	88	1.650	(89)	1.244	60
17	CONF.HIDROGRAF. DEL TAJO	3.552	1.178	2.608	2.166	55	289	(10)	442	20
17	MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA	2.390	1.514	677	922	209	10	23	(244)	(26)
17	PARQUE DE MAQUINARIA	1.503	874	626	413	4	0	1	212	51
17	CENTRO ESTUDIOS Y EXP.OO.PBCAS.	4.826	1.827	3.519	2.583	42	561	(17)	936	36
17	CENTRO NAC.DE INFORMACION GEOGRAF.	439	114	76	0	249	0	77	76	-
18	CONSEJO SUP. INVEST.CIENTIFIC.	33.163	1.494	31.609	25.974	60	0	0	5.636	22
18	INST. ASTROFISICA DE CANARIAS	1.337	463	915	893	1	42	(5)	23	3
20	C.INVEST.ENERG.MED.Y TECNOLOG.	7.983	1.157	7.361	7.001	0	536	(8)	361	5
20	INST.GEOLOG.Y MINERO DE ESPAÑA	5.524	378	5.256	4.064	6	116	(2)	1.193	29
21	SERV.NAL.PRODUC.AGRAR.(SENPA)	28.976	(10.797)	24.870	25.294	16.130	1.227	37	(424)	(2)
21	INST.CONSER.NATURALEZA (ICONA)	39.687	4.787	34.760	17.751	431	291	0	17.009	96
21	FONDO ORD.REGUL.PROD. y PREC.AGR	308.351	(9.949)	324.636	321.060	15.000	21.336	(2)	3.576	1
21	ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR.	12.609	8.137	4.478	6.244	1	7	(0)	(1.766)	(28)
21	F.REG.ORG.MERC.PR.PESCA Y C.M.	1.755	577	1.046	844	150	18	11	202	24
21	INSTITUTO ESPAÑOL OCEANOGRAFIA	2.949	485	2.492	2.145	0	28	(1)	347	16
23	CAJA POSTAL DE AHORROS	25.061	25.043	53	292	2	37	(191)	(239)	(82)
23	AEROPUERTOS NACIONALES	77.969	77.632	900	788	9	572	(167)	112	14
23	INST.NAL.PROMOCION DEL TURISMO	7.120	1.048	6.150	5.354	0	78	(1)	796	15
25	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	3.439	3.406	24	30	10	1	27	(5)	(18)
26	INSTITUTO SALUD CARLOS III	9.549	1.767	7.804	7.269	0	22	(0)	535	7
27	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	3.703	122	3.591	2.939	15	25	(0)	652	22
	TOTAL	900.603	371.314	526.068	538.073	37.060	33.839	1	(12.005)	(2)

ANEXO II-4.1
1990

DETALLE POR FUNCIONES DE LAS DESVIACIONES DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN 1.990. Excluidas transferenciás internas.

(en millones de pesetas).

FUNCIÓN	CRÉDITOS FINALES				OBLIGACIONES RECONOCIDAS				DESVIACIONES			
	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL	ESTADO	OAA	OACIFA	TOTAL
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	283.585	5.213	15.892	304.690	256.130	4.127	14.503	274.760	27.455	1.086	1.389	29.930
11 ALTA DIRECCIÓN ESTADO	25.272	..	..	25.272	23.376	..	..	23.376	1.895	..	..	1.895
12 ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.624	3.095	15.872	37.591	16.337	2.286	14.486	33.109	2.287	808	1.386	4.482
13 RELACIONES EXTERIORES	60.432	1.094	20	61.546	54.270	968	17	55.255	6.162	126	3	6.292
14 JUSTICIA	179.257	1.024	..	180.281	162.147	872	..	163.020	17.110	151	..	17.261
2. DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG.CIUD.	1.288.660	63.871	3.648	1.356.178	1.145.910	37.829	2.992	1.186.731	142.750	26.042	655	169.447
21 DEFENSA	847.634	26.639	3.648	877.920	726.716	9.964	2.992	739.673	120.918	16.675	655	138.248
22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	441.026	37.232	..	478.258	419.193	27.865	..	447.058	21.832	9.367	..	31.199
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOC.SOC.	815.205	1.644.327	5.040	2.464.572	795.146	1.543.445	4.281	2.342.872	20.060	100.882	759	121.701
31 SEG.SOCIAL Y PROTECC.SOCIAL	735.026	1.315.999	1.337	2.052.362	716.948	1.283.282	689	2.000.918	18.078	32.717	648	51.443
32 PROMOCIÓN SOCIAL	80.179	328.328	3.703	412.211	78.197	260.163	3.593	341.953	1.982	68.165	111	70.257
4. PRODUCCIÓN DE B.PÚBLICOS DE CARÁC.SOC.	986.340	142.823	7.067	1.136.230	960.139	96.967	6.114	1.063.220	26.201	45.856	953	73.011
41 SANIDAD	55.924	..	724	56.648	52.518	..	623	53.141	3.406	..	101	3.508
42 EDUCACIÓN	749.200	96.837	..	846.037	742.199	63.275	..	805.474	7.001	33.562	..	40.563
43 VIVIENDA Y URBANISMO	101.480	..	..	101.480	96.173	..	..	96.173	5.307	..	..	5.307
44 BIENESTAR COMUNITARIO	11.479	2.235	6.343	20.058	7.702	1.960	5.491	15.153	3.778	275	852	4.905
45 CULTURA	39.864	43.751	..	83.615	35.406	31.732	..	67.138	4.459	12.019	..	16.477
46 OTROS SERV.COMUNIT.SOCIALES	28.392	..	..	28.392	26.141	..	..	26.141	2.251	..	..	2.251
5. PRODUCCIÓN DE B.PÚBLICOS CARÁC.ECON.	1.390.017	63.432	202.806	1.656.255	1.266.711	56.466	177.526	1.500.704	123.306	6.966	25.280	155.551
51 INFRAESTRUC.BÁSICAS Y TRANSP.	1.067.485	..	93.575	1.161.059	976.395	..	80.674	1.057.069	91.089	..	12.901	103.990
52 COMUNICACIONES	166.298	..	..	166.298	150.364	..	..	150.364	15.934	..	..	15.934
53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	..	44.583	39.561	84.144	..	39.601	31.180	70.782	..	4.982	8.381	13.363
54 INVEST.CIENTÍF.TÉCN.Y APLICADA	141.909	2.161	69.231	213.301	128.588	1.736	65.652	195.976	13.320	426	3.579	17.325
55 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍST.	14.326	16.688	439	31.452	11.364	15.129	20	26.513	2.962	1.558	419	4.939
6. REGULACIÓN ECONÓM.DE CARÁC.GENERAL	594.096	59.440	47.311	700.847	413.654	41.275	32.825	487.754	180.442	18.165	14.486	213.093
61 REGULACIÓN ECONÓMICA	256.447	59.440	12.732	328.619	225.636	41.275	7.000	273.911	30.811	18.165	5.731	54.708
62 REGULACIÓN COMERCIAL	16.128	..	..	16.128	14.790	..	..	14.790	1.338	..	..	1.338
63 REGULACIÓN FINANCIERA	321.522	..	34.579	356.101	173.228	..	25.825	199.053	148.294	..	8.754	157.048
7. REGULACIÓN ECONÓM.DE SECT.PRODUCTIVOS	331.054	79.192	342.740	752.986	296.989	60.537	314.939	672.466	34.065	18.654	27.801	80.520
71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	115.226	67.390	335.620	518.237	107.169	52.260	308.217	467.646	8.057	15.130	27.404	50.591
72 INDUSTRIA	136.962	11.574	..	148.536	122.281	8.075	..	130.356	14.681	3.499	..	18.180
73 ENERGÍA	10.867	..	..	10.867	3.960	..	..	3.960	6.907	..	..	6.907
74 MINERÍA	62.436	..	..	62.436	58.934	..	..	58.934	3.502	..	..	3.502
75 TURISMO	5.562	228	7.120	12.910	4.645	203	6.722	11.570	918	25	397	1.340
8. TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	1.778.256	..	..	1.778.256	1.764.103	..	..	1.764.103	14.153	..	..	14.153
80 TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	1.778.256	..	..	1.778.256	1.764.103	..	..	1.764.103	14.153	..	..	14.153
9. TRANSF.AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL	2.582.731	..	27	2.582.758	2.425.062	..	..	2.425.062	157.669	..	27	157.696
91 TRANSFER. A ADM.PÚBL.TERRITOR.	2.199.078	..	27	2.199.105	2.092.408	..	..	2.092.408	106.671	..	27	106.697
92 RELACIONES FINANCIERAS CON LA CEE	383.653	..	..	383.653	332.654	..	..	332.654	50.999	..	..	50.999
0. DEUDA PÚBLICA	4.833.929	..	..	4.833.929	3.365.866	..	..	3.365.866	1.468.064	..	..	1.468.064
01 DEUDA PÚBLICA	4.833.929	..	..	4.833.929	3.365.866	..	..	3.365.866	1.468.064	..	..	1.468.064
TOTAL	14.883.873	2.058.298	624.531	17.566.702	12.689.709	1.840.646	553.181	15.083.536	2.194.164	217.652	71.350	2.483.166

ANEXO II-4.2

EJERCICIO 1990

CLASIFICACION ECONOMICO-FUNCIONAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR EL ESTADO Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS (en millones de pesetas). Excluídas transferencias internas.

CAPITULOS	GRUPOS DE FUNCIONES										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	TOTAL
1.- GASTOS DE PERSONAL	170.242	748.477	537.280	457.440	252.435	186.866	36.209	0	164	0	2.389.113
2.- GAST. B. CTES. Y SERV.	47.391	170.567	108.770	56.282	51.996	36.794	9.414	0	5	0	481.218
3.- GASTOS FINANCIEROS	0	485	483	275	903	0	5.844	0	0	1.472.453	1.480.442
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.706	8.891	1.662.959	339.704	275.913	14.710	367.449	1.698.251	2.114.995	1.380	6.506.960
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	240.339	928.421	2.309.492	853.701	581.247	238.369	418.916	1.698.251	2.115.164	1.473.833	10.857.733
6.- INVERSIONES REALES	32.041	255.062	20.336	88.712	730.227	55.815	18.632	0	104	0	1.200.930
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.326	1.416	4.359	110.562	174.515	29.600	168.961	65.852	309.793	0	867.385
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.367	256.478	24.695	199.274	904.743	85.416	187.593	65.852	309.898	0	2.068.315
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER	274.707	1.184.899	2.334.187	1.052.974	1.485.990	323.785	606.509	1.764.103	2.425.062	1.473.833	12.926.048
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	53	1.618	8.256	9.106	14.265	163.968	5.246	0	0	0	202.513
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0	215	429	1.139	448	1	60.711	0	0	1.892.033	1.954.975
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53	1.832	8.685	10.245	14.714	163.969	65.957	0	0	1.892.033	2.157.487
TOTAL	274.760	1.186.731	2.342.872	1.063.220	1.500.704	487.754	672.466	1.764.103	2.425.062	3.365.866	15.083.536

ANEXO II-5.1
EJERCICIO 1990

FLUJOS FINANCIEROS CON LA CEE

(en millones de pesetas)

CONCEPTO	OPERACIONES REALIZADAS EN 1990 (1)	OPERACIONES REGISTRADAS 1990 CORRESP. 1989 Y ANT. (2)	OPERACIONES CORRESP. 1990 REALIZ. EN EJ. SIGUIENTES (3)	TOTAL OPERACIONES IMPUTABLES A 1990 (4)=(1)-(2)+(3)	TOTAL OPERACIONES IMPUTABLES A 1989 (5)
a) FEOGA-GARANTIA	269.855	54.534	86.386	301.707	242.361[1]
b) Premio de cobranza (10% gestión recursos propios tradicionales)	9.102	1.402	1.479	9.179	9.139[1]
c) Intereses por anticipos FEOGA-GARANTIA	3.496	536	976	3.936	2.794
d) Reembolsos CEE	6.774	-	-	6.774	6.115
e) FEOGA-ORIENTACION	16.666	-	-	16.666	26.360
f) FEDER y FES	191.264	-	-	191.264	179.985
g) Otras transferencias CEE	4.281	-	-	4.281	5.733
h) Retorno CECA	961	-	-	961	-
TOTAL INGRESOS	502.399	56.472	88.841	534.768	472.487
a) Recursos IVA:					
Aportaciones (bruto)	331.950	-	-	331.950	282.612
Retornos	(90.224)	(9.710)	(7.319)	(87.833)	(116.517)
Liquidación ejercicios anteriores (neto)	38.590	38.590	-	-	31.476
Aportación por rectific. base IVA/90	-	-	6.879	6.879	-
SUBTOTAL	280.316	28.880	(440)	250.996	197.571
b) Recurso PNB:					
Aportación bruta	-	-	-	-	26.452
Retornos	(882)	(882)	-	-	(10.581)
Liquidaciones (neto)	2.532	2.532	-	-	2.198
SUBTOTAL	1.650	1.650	-	-	18.069
c) Recursos Propios Tradicionales:					
Derechos de aduana	66.143	12.273	11.800	65.670	67.008
Exacciones agrícolas	18.872	1.012	1.273	19.133	15.873
Cotización azúcar e isoglucosa	6.001	734	1.720	6.987	8.510
SUBTOTAL	91.016	14.019	14.793	91.790	91.391
d) Aportación al 6º FED	10.757	-	-	10.757	7.112
TOTAL APORTACIONES	383.739	44.549	14.353	353.543	314.143
S A L D O	118.660	11.923	74.488	181.225	158.344

[1] Cantidades no coincidentes con las correlativas del Anexo II.5 del Informe Anual de 1989 debido a la aportación de nuevos datos relativos a dicho ejercicio, con ocasión de las comprobaciones referidas a 1990.

ANEXO II-5.2
EJERCICIO 1990

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CEE

(En millones de pesetas)

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 1990	DERECHOS RECONOCIDOS 1990	GRADO EJECUCION (%)	DERECHOS RECONOCIDOS 1989	VARIACION	%
a) FEOGA-GARANTIA[1]	295.399	301.501	102	235.419	66.082	28
b) PREMIO DE COBRANZA	10.800	8.433	78	9.231	(798)	(9)
c) INTERESES FEOGA-GARANTIA	-	3.633	-	4.033	(400)	(10)
d) REEMBOLSO	6.720	6.774	100	6.115	659	11
e) FEOGA-ORIENTACION	37.700	16.666	44	26.360	(9.694)	(37)
f) FEDER	55.000	62.033	113	115.657	(53.624)	(46)
f) FSE	2.700	16.365	606	64.328	(47.963)	(75)
g) OTRAS TRANSFERENCIAS CEE	-	3.695	-	5.757	(2.062)	(36)
h) CECA	1.000	353	35	-	353	-
i) REINTEGROS	-	2.669	-	18.354	(15.685)	(85)
SUMA	409.319	422.122	103	485.254	(63.132)	(13)

GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 1990	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1990	GRADO EJECUCION (%)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1989	VARIACION	%
a) IVA	258.000	224.177	87	152.586	71.591	47
b) PNB	6.730	6.701	99	38.833	(32.132)	(83)
c) RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES	107.918	91.016	84	92.431	(1.415)	(2)
d) FED	11.000	10.757	98	7.712	3.045	39
e) AGENCIA APROVIS. EURATOM	5	3	60	-	3	-
SUMA	383.653	332.654	87	291.562	41.092	14
S A L D O	25.666	89.468	-	193.692	(104.224)	(54)

[1] Presupuesto del Organismo autónomo FORPPA.

ANEXO IV.1-1
1990

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES CONSOLIDADOS DEL GRUPO INI

Ejercicios 1989 y 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	1989	1990	Diferencia
INMOVILIZADO	**2.512.104**	**2.555.693**	**43.589**
Material	3 463 167	3 714 622	251 455
(Amortizaciones)	(1 328 778)	(1 485 033)	(156 255)
Inmaterial	14 921	29 955	15 034
Financiero	211 079	185 477	(25 602)
Gastos amortizables	65 246	41 840	(23 406)
Deudores a largo plazo	86 469	68 832	(17 637)
CIRCULANTE	**1.001.764**	**1.060.452**	**58.688**
Existencias	367 853	361 201	(6 652)
Deudores por operaciones de tráfico	522 143	591 818	69 675
Cuentas financieras	78 038	74 989	(3 049)
Ajustes por periodificación	33 730	32 444	(1 286)
TOTAL ACTIVO	**3.513.868**	**3.616.145**	**102.277**

PASIVO	1989	1990	Diferencia
FINANCIACION PROPIA	**827.155**	**787.847**	**(39.308)**
Del Grupo	566.155	542 076	(24.079)
De Privados	261 000	245 771	(15.229)
PROVISIONES LARGO PLAZO	70 754	256.082	185.328
RESULTADOS	(41 903)	(63 172)	(21 269)
FINANCIACION AJENA LARGO PLAZO	**1.480.026**	**1.259.812**	**(220.214)**
Empréstitos	248.471	223.290	(25.181)
Créditos	1.006.010	933.432	(72.578)
Acreedores	225.545	103.090	(122.455)
FINANCIACION A CORTO PLAZO	**1.177.836**	**1.375.576**	**197.740**
Créditos y empréstitos	461.115	624.174	163.059
Acreedores	582.891	708.959	126.068
Ajustes por periodificación	133.830	42.443	(91.387)
TOTAL PASIVO	3 513 868	3 616 145	102 277

ANEXO IV.1-2
1990

ESTADO COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS DEL GRUPO INI

Ejercicios de 1989 y 1990

(En millones de pesetas)

DEBE	1989	1990	Diferencia	HABER	1989	1990	Diferencia
GASTOS DE EXPLOTACION	**1.996.736**	**2.150.308**	**153.572**	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**2.048.874**	**2.143.797**	**94.923**
Variación de existencias	(29 424)	3 509	32 933	Ventas Mercado Nacional	1 301 442	1 343 081	41 639
Compras	570 016	590 371	20 355	Ventas Mercado Exterior	539 327	562 300	22 973
Gastos de personal	583 126	633 826	50 700	Ingresos accesorios a la			
Gastos financieros	225 688	233 655	7 967	explotación	19 896	30 035	10 139
Tributos	9 338	8 922	(416)	Ingresos financieros	46 127	45 339	(788)
Trabajos, suministros y				Subvenciones a la explotación	58 139	64 306	6 167
servicios exteriores	300 898	334 302	33 404	Trabajos para el inmovilizado	52 823	56 668	3 845
Transportes y fletes	44 149	33 279	(10 870)	Provisiones aplicadas a su finalidad	31 120	42 068	10 948
Gastos diversos	70 644	77 428	6 784				
Amortizaciones	189 598	192 433	2 835	**DIFERENCIAS DE CAMBIO**	65	3.673	3.608
Provisiones	32 703	42 583	9 880				
				RESULTADO CARTERA DE VALORES	5.465	—	(5.465)
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	**18.445**	**21.048**	**2.603**				
				RESULTADO DEL EJERCICIO	3.078	32.084	29.006
RESULTADOS DE LA CARTERA							
DE VALORES	—	2.756	2.756	Del Grupo	41.903	63.172	21.269
				De Minoritarios	(38.825)	(31.088)	7.737
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	**42.301**	**5.442**	**(36.859)**				
TOTAL DEBE	**2.057.482**	**2.179.554**	**122.072**	**TOTAL HABER**	**2.057.482**	**2.179.554**	**122.072**

ANEXO IV.1-3
1990

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES CONSOLIDADOS DEL GRUPO INI

Ejercicios 1989 y 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	1989	1990	Diferencia
INMOVILIZADO	**671.814**	**778.904**	**107.090**
Material	1 133 224	1 274 674	141 450
(Amortizaciones)	(598 961)	(645 897)	(46 936)
Financiero	123 729	139 464	15 735
Gastos amortizables	13 822	10 663	(3 159)
CIRCULANTE	**481.584**	**589.527**	**107.943**
Existencias	115 366	172 243	56 877
Deudores por operaciones de tráfico	187 473	274 494	87.021
Cuentas financieras	165 831	138 589	(27.242)
Ajustes periodificación	4 600	4 201	(399)
Cuenta de relación con el Estado por operaciones corrientes	8 314	--	(8.314)
TOTAL ACTIVO	**1.153.398**	**1.368.431**	**215.033**

PASIVO	1989	1990	Diferencia
FINANCIACIÓN PROPIA	**483.770**	**555.053**	**71.283**
Del Grupo	305 373	363 559	58 186
De Privados	178 397	191 494	13 097
PROVISIONES	**56.981**	**54.674**	**(2.307)**
RESULTADOS	**89.845**	**52.114**	**(37.731)**
FINANCIACIÓN AJENA A MEDIO Y LARGO PLAZO	**66.937**	**88.770**	**21.833**
Créditos	40 278	57.076	16.798
Finanzas y otros	26 659	31.694	5.035
FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO	**455.865**	**617.820**	**161.955**
Créditos	178 065	194.442	16.377
Acreedores y otros	262.935	401.479	138.544
Ajustes periodificación	14.865	3.327	(11.538)
Cuenta de relación con el Estado por operaciones corrientes	--	18.572	18.572
TOTAL PASIVO	**1.153.398**	**1.368.431**	**215.033**

ANEXO IV.1-4
1990

ESTADO COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS DEL GRUPO INH

Ejercicios de 1989 y 1990

(En millones de pesetas)

DEBE	1989	1990	Diferencia	HABER	1989	1990	
GASTOS DE EXPLOTACION	**1.132,724**	**1.503.066**	**370.342**	**INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**1.239.972**	**1.621.102**	**381.130**
Compras y Variac existencias	681 989	945 482	263 493	Ventas	1 190 234	1 563 249	373 015
Gastos de Personal	115 966	130 089	14 123	Ingresos financieros	28 175	29 280	1 105
Gastos Financieros	25 640	33 293	7 653	Diversos	21 563	28 573	7.010
				RESULTADO CARTERA DE VALORES	**50.630**	**11.117**	**(39.513)**
Tributos	47 138	58 136	10 998				
Trabajos suministros y servicios exteriores	146 750	200 937	54 187				
Transportes y fletes	48 386	52 002	3 616				
Amortizaciones	66 855	(*)70 767	3 912				
Provisiones	--	12.360	12 360				
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	**24.050**	**7.458**	**(16.592)**				
RESULTADO DEL EJERCICIO	**133.828**	**121.695**	**(12.133)**				
Resultados consolidados	89 845	52.114	(37.731)				
Intereses minoritarios	31 181	33.579	2.398				
Impuesto sobre sociedades	12 802	36.002	23.200				
TOTAL DEBE	**1.290.602**	**1.632.219**	**341.617**	**TOTAL HABER**	**1.290.602**	**1.632.219**	**341.617**

V. La Contratación Administrativa

ANEXO V-1

1.990

CONTRATOS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN 1.990, CLASIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA Y DEPARTAMENTO CONTRATANTE

DEPARTAMENTO MINISTERIAL	OBRAS		SUMINISTROS		OTROS		TOTAL	
	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)
Administraciones Públicas	4	127	-	- -	4	122	8	249
Agricultura, Pesca y Alimentación	11	1.115	15	1.024	20	5.059	46	7.198
Asuntos Exteriores	8	5.263	3	225	1	41	12	5.529
Asuntos Sociales	1	335	-	- -	4	481	5	816
Cultura	30	7.476	10	656	7	307	47	8.439
Defensa	44	8.143	306	175.346	52	27.017	402	210.506
Economía y Hacienda	33	8.090	17	2.025	51	15.363	101	25.478
Educación y Ciencia	103	30.035	-	- -	-	- -	103	30.035
Industria y Energía	-	- -	-	- -	3	370	3	370
Interior	73	28.524	14	1.064	28	4.307	115	33.895
Justicia	77	11.873	1	93	-	- -	78	11.966
Obras Públicas y Urbanismo . . .	278	576.568	2	665	88	17.888	368	595.121
Relac. Cortes y Secret. Gobierno	8	1.665	12	1.307	3	3.976	23	6.948
Sanidad y Consumo	1	262	4	215	11	1.402	16	1.879
Trabajo y Seguridad Social	9	2.468	3	696	6	486	18	3.650
Transporte, Turismo y Comunic. .	61	71.321	25	3.739	36	7.218	122	82.278
TOTALES	**741**	**753.265**	**412**	**187.055**	**314**	**84.037**	**1.467**	**1.024.357**

ANEXO V-2

1.990

CONTRATOS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN 1.990, CLASIFICADOS PORDEPARTAMENTOS Y SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN

DEPARTAMENTO MINISTERIAL	SUBASTA		CONCURSO		ADJ. DIRECTA		TOTAL	
	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)
Administraciones Públicas	-	- -	-	- -	8	249	8	249
Agricultura, Pesca y Alimentación	-	- -	21	5.514	25	1.684	46	7.198
Asuntos Exteriores	-	- -	-	- -	12	5.529	12	5.529
Asuntos Sociales	-	- -	2	343	3	473	5	816
Cultura	-	- -	13	3.506	34	4.933	47	8.439
Defensa	1	289	63	29.017	338	181.200	402	210.506
Economía y Hacienda	5	1.929	31	11.828	65	11.721	101	25.478
Educación y Ciencia	1	231	74	24.342	28	5.462	103	30.035
Industria y Energía	-	- -	2	170	1	200	3	370
Interior	-	- -	14	12.847	101	21.048	115	33.895
Justicia	2	1.002	1	4.695	75	6.269	78	11.966
Obras Públicas y Urbanismo	74	43.793	172	527.883	122	23.445	368	595.121
Relac. Cortes y Secret. Gobierno	-	- -	1	110	22	6.838	23	6.948
Sanidad y Consumo	-	- -	6	1.081	10	798	16	1.879
Trabajo y Seguridad Social	2	1.106	5	1.825	11	719	18	3.650
Transporte, Turismo y Comunic.	5	1.962	74	74.951	43	5.365	122	82.278
TOTALES	**90**	**50.312**	**479**	**698.112**	**898**	**275.933**	**1.467**	**1.024.357**

ANEXO V-3.

1.990

CONTRATOS DE OBRAS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN 1.990, CLASIFICADOS POR DEPARTAMENTOS Y SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN

DEPARTAMENTO MINISTERIAL	SUBASTA		CONCURSO		ADJ. DIRECTA		TOTAL	
	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)
Administraciones Públicas	-	- -	-	- -	4	127	4	127
Agricultura, Pesca y Alimentación	-	- -	2	696	9	419	11	1.115
Asuntos Exteriores	-	- -	-	- -	8	5.263	8	5.263
Asuntos Sociales	-	- -	-	- -	1	335	1	335
Cultura	-	- -	8	3.199	22	4.277	30	7.476
Defensa	1	289	1	299	42	7.555	44	8.143
Economía y Hacienda	5	1.929	-	- -	28	6.161	33	8.090
Educación y Ciencia	1	231	74	24.342	28	5.462	103	30.035
Industria y Energía	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
Interior	-	- -	4	10.737	69	17.787	73	28.524
Justicia	2	1.002	1	4.695	74	6.176	77	11.873
Obras Públicas y Urbanismo	74	43.793	115	513.901	89	18.874	278	576.568
Relac. Cortes y Secret. Gobierno	-	- -	-	- -	8	1.665	8	1.665
Sanidad y Consumo	-	- -	1	262	-	- -	1	262
Trabajo y Seguridad Social	2	1.106	2	1.067	5	295	9	2.468
Transporte, Turismo y Comunic	5	1.962	45	68.432	11	927	61	71.321
TOTALES	**90**	**50.312**	**253**	**627.630**	**398**	**75.323**	**741**	**753.265**

ANEXO V-4

1.990

CONTRATOS DE SUMINISTROS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN 1.990, CLASIFICADOS POR DEPARTAMENTOS Y SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN

DEPARTAMENTO MINISTERIAL	SUBASTA		CONCURSO		ADJ. DIRECTA		TOTAL	
	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)	Núm.	Importe (mill.)
Administraciones Públicas	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
Agricultura, Pesca y Alimentación	-	- -	6	743	9	281	15	1.024
Asuntos Exteriores	-	- -	-	- -	3	225	3	225
Asuntos Sociales	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
Cultura	-	- -	1	108	9	548	10	656
Defensa	-	- -	58	27.294	248	148.052	306	175.346
Economía y Hacienda	-	- -	-	- -	17	2.025	17	2.025
Educación y Ciencia	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
Industria y Energía	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
Interior	-	- -	2	374	12	690	14	1.064
Justicia	-	- -	-	- -	1	93	1	93
Obras Públicas y Urbanismo	-	- -	-	- -	2	665	2	665
Relac. Cortes y Secret. Gobierno	-	- -	-	- -	12	1.307	12	1.307
Sanidad y Consumo	-	- -	-	- -	4	215	4	215
Trabajo y Seguridad Social	-	- -	1	553	2	143	3	696
Transporte, Turismo y Comunic.	-	- -	15	3.138	10	601	25	3.739
TOTALES	-	- -	**83**	**32.210**	**329**	**154.845**	**412**	**187.055**

ANEXO V-5
1.990

OTROS CONTRATOS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN 1.990, CLASIFICADOS POR DEPARTAMENTOS Y SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN

DEPARTAMENTO MINISTERIAL	SUBASTA Núm.	SUBASTA Importe (mill.)	CONCURSO Núm.	CONCURSO Importe (mill.)	ADJ. DIRECTA Núm.	ADJ. DIRECTA Importe (mill.)	TOTAL Núm.	TOTAL Importe (mill.)
Administraciones Públicas	-	- -	-	- -	4	122	4	122
Agricultura, Pesca y Alimentación	-	- -	13	4.075	7	984	20	5.059
Asuntos Exteriores	-	- -	-	- -	1	41	1	41
Asuntos Sociales	-	- -	2	343	2	138	4	481
Cultura	-	- -	4	199	3	108	7	307
Defensa	-	- -	4	1.424	48	25.593	52	27.017
Economía y Hacienda	-	- -	31	11.828	20	3.535	51	15.363
Educación y Ciencia	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
Industria y Energía	-	- -	2	170	1	200	3	370
Interior	-	- -	8	1.736	20	2.571	28	4.307
Justicia	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
Obras Públicas y Urbanismo	-	- -	57	13.982	31	3.906	88	17.888
Relac. Cortes y Secret. Gobierno	-	- -	1	110	2	3.866	3	3.976
Sanidad y Consumo	-	- -	5	819	6	583	11	1.402
Trabajo y Seguridad Social	-	- -	2	205	4	281	6	486
Transporte, Turismo y Comunic.	-	- -	14	3.381	22	3.837	36	7.218
TOTALES	-	- -	143	38.272	171	45.765	314	84.037

ANEXO V-6
1990

RESUMEN DE INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LA EJECUCION DE DETERMINADOS CONTRATOS, ADJUDICADOS MEDIANTE SUBASTA O CONCURSO POR LA D. G. DE CARRETERAS, DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, DURANTE LOS AÑOS 1985 y 1986.

- 1 - GU - 283.- Autovía de Aragón.- Madrid-Zaragoza.- Tramo: Trijueque-Intersección C- 204.- Ampliación calzada de la C.N.II de Madrid a Francia por Barcelona. P.K. 79,5 al 105,0. Adjudicado en 25 de Septiembre de 1985, mediante concurso, por 1.705.496.568 ptas. con una baja del 26,4% y un plazo de ejecución de dieciocho meses, que vencía el 15 de Febrero de 1987. Tuvo cuatro prórrogas, hasta 31 de Diciembre de 1988, y fue objeto de dos reformados que supusieron un incremento conjunto del 19,40%, y de dos contratos complementarios que significaron aumentos del 12,04%, recibiéndose provisionalmente en 20 de Febrero de 1991.

- 1 - GU - 284.- Ampliación calzada.- C.N.II de Madrid a Francia por Barcelona, P.K. 50,40 al 59,00.- Variante de Guadalajara.- Autovía de Aragón. Adjudicado en 13 de Diciembre de 1986, mediante concurso, por 1.404.233.628 ptas, con una baja del 23,26%, y plazo de ejecución de veinte meses que concluía el 13 de Agosto de 1988. Tuvo cuatro prórrogas hasta el 31 de Diciembre de 1990, y fue objeto de dos reformados que supusieron el 19,88% del presupuesto primitivo y de un complementario por el 19,90%, recibiéndose provisionalmente en 11 de Septiembre de 1991.

- 1 - V - 412 B.- Desdoblamiento de calzada y enlaces.- C.N.332 de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, P.K. 251,0 al 257,0.- Acceso a Valencia. Adjudicado en 27 de Mayo de 1986, mediante concurso, por 1.927.201.851 ptas, con una baja del 24,30%, y plazo de ejecución de diecinueve meses que vencía en 1 de Abril de 1988. Tuvo tres prórrogas hasta el 30 de Julio de 1989, y fue objeto de un modificado por el 18,79% y de un complementario por el 19,99%, recibiéndose provisionalmente en 14 de Diciembre de 1989 el primitivo y su modificado y en 12 de Marzo de 1991 el complementario.

- 1 - CR - 304.- Autovía Andalucía.- Madrid-Sevilla.- Primer sector.- Tramo: Manzanares (N)-Valdepeñas (S).- C.N.IV Madrid a Cádiz, P.K. 171,80 al 208,60. Adjudicado en 13 de Noviembre de 1986, por 3.314.026.772 ptas, con una baja del 16,30%, mediante concurso, y con un plazo de ejecución de dieciocho meses, que vencía el 10 de Octubre de 1988. Tuvo dos prorrogas hasta el 31 de Diciembre de 1991 y fue objeto de dos reformados que supusieron incrementos del 19,66% y de un complementario del 19,95%, recibiéndose el proyecto primitivo y sus reformados el 19 de Julio de 1991, sin que se tenga constancia de la recepción del complementario.

- 1 - A - 427.- Autovía de Levante.- Madrid-Valencia-Alicante.- Tramo 4°.- Duplicación calzada.- C.N. 330 de Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza, P.K. 373,0 al 382,0.- Tramo Elda-Novelda. Fue adjudicado en 6 de Noviembre de 1986, mediante concurso, por 1.011.107.691, con una baja del 8,95% y un plazo de catorce meses que vencía en 21 de Febrero de 1988. Tuvo cuatro prorrogas hasta el 30 de Junio de 1989, y fue objeto de un modificado por el 19,66% y de un complementario del 19,99%, recibiéndose el primitivo y su modificado en 29 de Mayo de 1990 y el complementario en 28 de Septiembre siguiente

- 1 - CO - 503 y 31 - CR - 502.- CC -411 de Almadén a Posadas, P.K. 0,00 al 69,5.- Tramo: Almadén - N. 482.- Mejora de plataforma. Adjudicado en 22 de Septiembre de 1986, mediante subasta, por 805.255.528 ptas, con una baja del 20,2%, y un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 1988. Tuvo una prórroga de dos meses y fue objeto de dos modificados por un 19,95% y de un complementario por el 19,99%, habiéndose recibido el primitivo y su modificado en 16 de Octubre de 1990.

- 1 - TU - 344.- C.N. 401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo.- Autovía Madrid-Toledo, P.K. 55,0 al 65,56.- Tramo: Cabañas de la Sagra (S) - Toledo (N). Adjudicado en 6 de Noviembre de 1986, mediante concurso, por 1.444.584.000, con una baja del 16,31%, y un plazo de ejecución de diecinueve meses que concluía en 12 de Julio de 1988.

ANEXO V-6

1990 2)

Tuvo dos prórrogas hasta el 31 de Diciembre de 1989, y fue objeto de un modificado del 19,77% y de un complementario de 19,32%, recibiéndose el primitivo y su reformado en 18 de Abril de 1991 y el complementario el 18 de Julio siguiente.

- 1 - A - 430.- Autovía de circunvalación de Alicante.- C.N. - 340 de Cádiz a Barcelona y N - 532 de Almería a Valencia.- Tramo: Enlace Villafranqueza - Autovía Alicante-Murcia. Adjudicado en 29 de Diciembre de 1986, mediante concurso, por 4.302.560.767 ptas, con una baja del 4,11%, y un plazo de ejecución de veintiocho meses, que concluía en 27 de Julio de 1989. Tuvo dos prórrogas hasta 30 de Junio de 1990, y fue objeto de un modificado del 19,98% y de un complementario del 19,797%, recibiéndose los mismos el 14 de Marzo de 1991.

- 2 - T - 307.- Mejora de plataforma y acondicionamiento de los locales.- C.N. - 420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca, P.K. 485,7 al 505, 4.- Tramo: Fabret-Ruidecols. Adjudicado en 17 de Diciembre de 1986, mediante subasta, por 825.450.000 ptas, con una baja del 33,75% y un plazo de ejecución de veintiocho meses, que concluía en 2 de Marzo de 1989. Tuvo una prórroga hasta el 31 de Diciembre de 1989 y fue objeto de un modificado del 19,91% y de un complementario del 19,99%, recibiéndose los mismos el 30 de Abril de 1991.

ANEXO V-7
1990

RESUMEN DE INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LA EJECUCION DE DETERMINADOS CONTRATOS, ADJUDICADOS MEDIANTE SUBASTA O CONCURSO POR LA D.G. DE OBRAS HIDRAULICAS, DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, DURANTE LOS AÑOS 1984, 1985 y 1986

- **Revestimiento del Canal de Urgel, km.74,1 al 109,7.-T.M. de Bellpuig y otros (Lérida).**- Adjudicado en Noviembre de 1984 por 1.014.236.000 pts, con una baja del 32,79%, con un plazo de ejecución de cuarenta y dos meses, que vencía el 14 de Mayo de 1988. Fue objeto de dos modificados que supusieron un incremento conjunto del 19,90% del presupuesto primitivo y de un complementario que representa un nuevo aumento del 19,43%, concluyendo definitivamente las obras en 30 de Abril de 1991.

- **Elevación y canal de Fuente Alamo en T.M. de Fuente Alamo (Murcia).**- Adjudicado en 29 de Abril de 1985, por 1.262.125.000 ptas, con una baja del 42,5% un plazo de ejecución de treinta meses, que vencía en 13 de Enero de 1988. Fue objeto de un modificado y de un complementario que supusieron incrementos respectivos del 19,95% y del 19,70%, además de tres prórrogas, terminándose las obras en Diciembre de 1990.

- **Red Informática de información hidrológica.- Cuenca del Segura.**- Adjudicado por concurso en Octubre de 1985, por 1.174.145.279 ptas, sin baja alguna, con un plazo de ejecución de dieciocho meses, que concluía el 22 de Mayo de 1987. Tuvo un modificado y un complementario que representaron incrementos respectivos del 19,95% y 19,96%, además de siete prórrogas, concluyéndose las obras en 31 de Diciembre de 1991.

- **Canalización río Segre en La Seo de Urgel (Lérida).**- Adjudicado en 19 de Diciembre de 1985, por 237.446.000 ptas, con una baja del 47,10%, con un plazo de ejecución de veintiocho meses, que vencía en 17 de Mayo de 1988. Tuvo un modificado y un complementario, que significaron aumentos del 19,83% y 19,90%, además de una prórroga, terminándose las obras en Enero de 1991.

ANEXO V-7
1990 2)

- **Redes principales y primarias de tuberías y desagües y caminos de la zona regable de Lorca y valle del Guadalentin.- Sector I.- Segunda Fase (Murcia).**- Adjudicado en 19 de Septiembre de 1986, por subasta, en 424.204.000 ptas, con una baja del 34,52%, y con un plazo de ejecución de treinta y seis meses, que concluía en 4 de Noviembre de 1989. Fue objeto de un modificado y un complementario, que supusieron incrementos del 18,35% y 18,73%, además de tres prórrogas, finalizando las obras en 30 de Abril de 1991.

- **Adecuación de la rambla de El Saltador y conducción del trasvase Tajo-Segura, desde el Saltador al embalse de Cuevas de Almanzora.- T.M. Huercal-Overa (Almería).**- Adjudicado en 19 de Septiembre de 1986 por 232.070.000 ptas, con una baja del 28,36%, y un plazo de ejecución de veinte meses, que terminaba en 15 de junio de 1988. Fue objeto de dos modificados que significaron un incremento conjunto del 19,94% y de un complementario del 19,85%, además de dos prórrogas, concluyéndose las obras en Diciembre de 1990. Por otra parte, este contrato tuvo otros complementarios, todos ellos adjudicados en 4 de Agosto de 1988 al mismo contratista —que era uno de los integrantes de la Unión Temporal adjudicataria de las obras primitivas—, después de consultadas a iguales empresas en cada caso, por importes de 24.133.122, 24.208.178 y 24.167.353 ptas, que fueron adjudicados directamente por ser su precio particular inferior a 25.000.000 ptas.

VI. **Universidades que permanecen en el ámbito de competencia del Estado**

ANEXO VI-1
1990

UNIVERSIDADES
ESTADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 1990
(En millones de pesetas)

UNIVERSIDAD	GASTOS				INGRESOS				REMANENTE PRESUPUESTARIO
	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	CRÉDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES NETAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCIDOS	
ALCALÁ DE HENARES	6.804	99	6.903	5.807	6.804	99	6.903	5.917	110
BALEARES	3.037	1.395	4.432	2.939	3.037	1.395	4.432	3.479	540
CANTABRIA	4.895	1.277	6.172	4.896	4.895	1.277	6.172	4.896	(0)
EXTREMADURA	4.913	1.492	6.405	5.541	4.913	1.492	6.405	5.771	230
AUTÓNOMA DE MADRID	13.162	1.467	14.629	11.807	13.162	1.467	14.629	12.246	439
CARLOS III DE MADRID	1.403	256	1.659	842	1.403	256	1.659	1.445	603
COMPLUTENSE DE MADRID	25.506	12.682	38.188	32.145	25.506	12.682	38.188	34.586	2.441
MURCIA	7.476	2.425	9.901	8.570	7.476	2.425	9.901	8.665	95
OVIEDO	10.349	1.201	11.550	9.967	10.349	1.201	11.550	10.189	222
SALAMANCA	8.925	2.347	11.272	10.815	8.925	2.347	11.272	10.384	(431)
UNED	7.716	1.059	8.775	7.852	7.716	1.059	8.775	8.101	249
VALLADOLID	10.669	2.841	13.510	11.461	10.669	2.841	13.510	11.597	136
ZARAGOZA	12.679	2.845	15.524	12.878	12.679	2.845	15.524	12.795	(83)
T O T A L	**117.534**	**31.386**	**148.920**	**125.520**	**117.534**	**31.386**	**148.920**	**130.071**	**4.551**

Anexo VI-2
1990

UNIVERSIDADES

ESTADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 1990 (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

(En millones de pesetas)

GASTOS					INGRESOS				
CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICAC. NETAS	CRÉDITOS FINALES	OBLIGAC. RECONOC.	CAPÍTULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFIC. NETAS	PREVISIONES FINALES	DERECHOS RECONOCI-DOS
1. GASTOS DE PERSONAL	76.007	9.104	85.111	82.489	1. IMPUESTOS DIRECTOS				
2. GAST. O. CTES. Y SERV.	17.257	3.150	20.407	18.958	2. IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. GASTOS FINANCIEROS	33	0	33	2	3. TASAS Y OTROS INGRESOS	25.665	2.938	28.603	28.644
4. TRANSFERENCIAS CTES.	1.897	231	2.128	1.706	4. TRANSFERENCIAS CTES.	71.478	8.248	79.726	79.724
					5. INGRESOS PATRIMONIALES	831	95	926	1.091
TOTAL OPERAC. CORRIENTES	**95.194**	**12.485**	**107.679**	**103.155**	**TOTAL OPERAC. CORRIENTES**	**97.974**	**11.281**	**109.255**	**109.459**
6. INVERSIONES REALES	22.038	18.829	40.867	22.114	6. ENAJENACIÓN INVER. REALES	-	-	-	-
7. TRANSFERENC. DE CAPITAL	42	46	88	75	7. TRANSFERENC. DE CAPITAL	13.897	6.645	20.542	20.487
TOTAL OPERAC. DE CAPITAL	**22.080**	**18.875**	**40.955**	**22.189**	**TOTAL OPERAC. DE CAPITAL**	**13.897**	**6.645**	**20.542**	**20.487**
0. EJERCICIOS CERRADOS	--	--	--	--					
TOTAL OPERAC. NO FINANC.	**117.274**	**31.360**	**148.634**	**125.344**	**TOTAL OPERAC. NO FINANC.**	**111.871**	**17.926**	**129.797**	**129.946**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	194	26	220	172	8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.659	13.457	19.116	121
9. PASIVOS FINANCIEROS	66	0	66	4	9. PASIVOS FINANCIEROS	4	3	7	4
TOTAL OPERAC. FINANCIERAS	**260**	**26**	**286**	**176**	**TOTAL OPERAC. FINANCIERAS**	**5.663**	**13.460**	**19.123**	**125**
TOTAL	**117.534**	**31.386**	**148.920**	**125.520**	**TOTAL**	**117.534**	**31.386**	**148.920**	**130.071**

Anexo VI-3.1
1990

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO 1990.

(En millones de pesetas)

UNIVERSIDAD	CRÉDITOS FINALES (1)	OBLIGACIONES RECONOC. 1990 (2)	OBLIGACIONES RECONOC. 1989 (3)	DESVIACIONES		VARIACIONES	
				ABSOLUTAS (4=1-2)	RELATIVAS (5=4/1*100)	ABSOLUTAS (6=2-3)	RELATIVAS (7=6/3*100)
ALCALÁ DE HENARES	6.903	5.807	4.323	1.096	15,88	1.484	34,33
BALEARES	4.432	2.939	2.736	1.493	33,69	203	7,42
CANTABRIA	6.172	4.896	4.103	1.276	20,67	793	19,33
EXTREMADURA	6.405	5.541	4.461	864	13,49	1.080	24,21
AUTÓNOMA DE MADRID	14.629	11.807	9.424	2.822	19,29	2.383	25,29
CARLOS III DE MADRID	1.659	842	110	817	49,25	732	665,45
COMPLUTENSE DE MADRID	38.188	32.145	27.037	6.043	15,82	5.108	18,89
MURCIA	9.901	8.570	6.439	1.331	13,44	2.131	33,10
OVIEDO	11.550	9.967	8.617	1.583	13,71	1.350	15,67
SALAMANCA	11.272	10.815	8.219	457	4,05	2.596	31,59
UNED	8.775	7.852	6.234	923	10,52	1.618	25,95
VALLADOLID	13.510	11.461	9.072	2.049	15,17	2.389	26,33
ZARAGOZA	15.524	12.878	10.279	2.646	17,04	2.599	25,28
T O T A L	**148.920**	**125.520**	**101.054**	**23.400**	**15,71**	**24.466**	**24,21**

Anexo VI-3.2
1990

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 1990.

(En millones de pesetas)

UNIVERSIDAD	PREVIS. FINALES (sin Rte. de T.) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	DERECHOS RECONOC. 1989 (3)	DESVIACIONES		VARIACIONES	
				ABSOLUTAS (4=1-2)	RELATIVAS (5=4/1*100)	ABSOLUTAS (6=2-3)	RELATIVAS (7=6/3*100)
ALCALÁ DE HENARES	6.903	5.917	4.402	986	14,28	1.515	34,42
BALEARES	4.432	3.479	2.805	953	21,50	674	24,03
CANTABRIA	6.172	4.896	4.334	1.276	20,68	562	12,97
EXTREMADURA	6.405	5.771	4.757	634	9,90	1.014	21,32
AUTÓNOMA DE MADRID	14.629	12.246	10.258	2.383	16,29	1.988	19,38
CARLOS III DE MADRID	1.659	1.445	130	214	12,90	1.315	1.011,54
COMPLUTENSE DE MADRID	38.188	34.586	26.650	3.602	9,43	7.936	29,78
MURCIA	9.901	8.665	6.624	1.236	12,48	2.041	30,81
OVIEDO	11.550	10.189	8.617	1.361	11,78	1.572	18,24
SALAMANCA	11.272	10.384	8.327	888	7,68	2.057	24,70
UNED	8.775	8.101	6.659	674	7,68	1.442	21,65
VALLADOLID	13.510	11.597	9.895	1.913	14,16	1.702	17,20
ZARAGOZA	15.524	12.795	11.670	2.729	17,58	1.125	9,64
TOTAL	**148.920**	**130.071**	**105.128**	**18.849**	**12,66**	**24.943**	**23,73**

Anexo VI-4.1
1990

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	31/12/90	PASIVO	31/12/90
Inmovilizado	2.738	Patrimonio y reservas	311
Existencias	-	Subvenciones capital	2.875
Deudores	1.613	Deudas medio y largo plazo	--
Partidas pendientes aplicación	-	Deudas corto plazo	1.805
Cuentas financieras	523	Partidas pendientes aplicación	--
Resultados	117	Resultados	--
TOTAL ACTIVO	**4.991**	**TOTAL PASIVO**	**4.991**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

DEBE	31/12/90	HABER	31/12/90
Existencias iniciales	--	Existencias finales	--
Compras	--	Ventas	702
Gastos Personal y Prest.Sociales	3.006	Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.	6
TSSE y Tributos	926	Subv.Explot.y Transf.Corrientes	3.264
Subv.Explot. y Transf.corrientes	57	Otros Ingresos	64
Transferencias Capital	50		
Otros Gastos	--		
Dotación Amortización	--		
Total DEBE		**Total HABER**	
- Resultado Corriente	4.039	- Resultado Corriente	4.036
- Resultado Extraordinario	27	- Resultado Extraordinario	<22>
- Modif.Obligaciones y Dchos.	112	- Modif.Obligaciones y Dchos.	47
Saldo Acreedor		**Saldo Deudor**	117
TOTAL	**4.178**	**TOTAL**	**4.178**

Anexo VI-4.2
1990

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	31/12/90	PASIVO	31/12/90
Inmovilizado	13.525	Patrimonio y reservas	11.458
Existencias	--	Subvenciones capital	5.883
Deudores	2.967	Deudas medio y largo plazo	--
Partidas pendientes aplicación	433	Deudas corto plazo	522
Cuentas financieras	907	Partidas pendientes aplicación	515
Resultados	546	Resultados	0
TOTAL ACTIVO	**18.378**	**TOTAL PASIVO**	**18.378**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

DEBE	31/12/90	HABER	31/12/90
Existencias iniciales	--	Existencias finales	--
Compras	--	Ventas	1.784
Gastos Personal y Prest.Sociales	8.181	Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.	147
TSSE y Tributos	1.927	Subv.Explot.y Transf.Corrientes	7.973
Subv.Explot. y Transf.corrientes	183	Otros Ingresos	88
Transferencias Capital	--		
Otros Gastos	--		
Dotación Amortización	247		
Total DEBE		**Total HABER**	
- Resultado Corriente	10.538	- Resultado Corriente	9.992
- Resultado Extraordinario	--	- Resultado Extraordinario	--
- Modif.Obligaciones y Dchos.	--	- Modif.Obligaciones y Dchos.	--
Saldo Acreedor	**--**	**Saldo Deudor**	**546**
TOTAL	**10.538**	**TOTAL**	**10.538**

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	31/12/90	PASIVO	31/12/90
Inmovilizado	14.500	Patrimonio y reservas	13.782
Existencias	--	Subvenciones capital	1.993
Deudores	533	Deudas medio y largo plazo	--
Partidas pendientes aplicación	--	Deudas corto plazo	263
Cuentas financieras	1.140	Partidas pendientes aplicación	--
Resultados		Resultados	135
TOTAL ACTIVO	**16.173**	**TOTAL PASIVO**	**16.173**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

DEBE	31/12/90	HABER	31/12/90
Existencias iniciales	--	Existencias finales	--
Compras	--	Ventas	1.001
Gastos Personal y Prest.Sociales	3.195	Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.	101
TSSE y Tributos	773	Subv.Explot.y Transf.Corrientes	3.122
Subv.Explot. y Transf.corrientes	116	Otros Ingresos	3
Transferencias Capital	8		
Otros Gastos	--		
Dotación Amortización	--		
Total DEBE		**Total HABER**	
- Resultado Corriente	4.092	- Resultado Corriente	4.227
- Resultado Extraordinario	--	- Resultado Extraordinario	--
- Modif.Obligaciones y Dchos.	--	- Modif.Obligaciones y Dchos.	--
Saldo Acreedor	**135**	**Saldo Deudor**	
TOTAL	**4.227**	**TOTAL**	**4.227**

Anexo VI-4.4
1990

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	31/12/90	PASIVO	31/12/90
Inmovilizado	4.030	Patrimonio y reservas	3.971
Existencias	--	Subvenciones capital	629
Deudores	196	Deudas medio y largo plazo	--
Partidas pendientes aplicación	--	Deudas corto plazo	380
Cuentas financieras	807	Partidas pendientes aplicación	1
Resultados		Resultados	52
TOTAL ACTIVO	**5.033**	**TOTAL PASIVO**	**5.033**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

DEBE	31/12/90	HABER	31/12/90
Existencias iniciales	--	Existencias finales	--
Compras	--	Ventas	95
Gastos Personal y Prest.Sociales	442	Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.	13
TSSE y Tributos	222	Subv.Explot.y Transf.Corrientes	707
Subv.Explot. y Transf.corrientes	3	Otros Ingresos	--
Transferencias Capital	--		
Otros Gastos	--		
Dotación Amortización	96		
Total DEBE		**Total HABER**	
- Resultado Corriente	763	- Resultado Corriente	815
- Resultado Extraordinario	--	- Resultado Extraordinario	--
- Modif.Obligaciones y Dchos.	--	- Modif.Obligaciones y Dchos.	--
Saldo Acreedor	**52**	**Saldo Deudor**	
TOTAL	**815**	**TOTAL**	**815**

Anexo VI-4.5
1990

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	31/12/90	PASIVO	31/12/90
Inmovilizado	12.994	Patrimonio y reservas	11.728
Existencias	113	Subvenciones capital	2.406
Deudores	1.833	Deudas medio y largo plazo	--
Partidas pendientes aplicación	1	Deudas corto plazo	625
Cuentas financieras	81	Partidas pendientes aplicación	--
Resultados		Resultados	263
TOTAL ACTIVO	**15.022**	**TOTAL PASIVO**	**15.022**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

DEBE	31/12/90	HABER	31/12/90
Existencias iniciales	113	Existencias finales	113
Compras	--	Ventas	2.264
Gastos Personal y Prest.Sociales	6.952	Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.	58
TSSE y Tributos	1.672	Subv.Explot.y Transf.Corrientes	6.659
Subv.Explot. y Transf.corrientes	135	Otros Ingresos	27
Transferencias Capital	2		
Otros Gastos	--		
Dotación Amortización	--		
Total DEBE		**Total HABER**	
- Resultado Corriente	8.874	- Resultado Corriente	9.121
- Resultado Extraordinario	--	- Resultado Extraordinario	--
- Modif.Obligaciones y Dchos.	(12)	- Modif.Obligaciones y Dchos.	4
Saldo Acreedor	**263**	**Saldo Deudor**	
TOTAL	**9.125**	**TOTAL**	**9.125**

Anexo VI-4.6
1990

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	31/12/90	PASIVO	31/12/90
Inmovilizado	4.997	Patrimonio y reservas	2.127
Existencias	--	Subvenciones capital	3.107
Deudores	1.699	Deudas medio y largo plazo	--
Partidas pendientes aplicación	41	Deudas corto plazo	1.192
Cuentas financieras	134	Partidas pendientes aplicación	--
Resultados		Resultados	445
TOTAL ACTIVO	**6.871**	**TOTAL PASIVO**	**6.871**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

DEBE	31/12/90	HABER	31/12/90
Existencias iniciales	--	Existencias finales	--
Compras	--	Ventas	2.404
Gastos Personal y Prest.Sociales	7.161	Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.	49
TSSE y Tributos	1.500	Subv.Explot.y Transf.Corrientes	6.781
Subv.Explot. y Transf.corrientes	193	Otros Ingresos	65
Transferencias Capital	--		
Otros Gastos	--		
Dotación Amortización	--		
Total DEBE		**Total HABER**	
- Resultado Corriente	8.854	- Resultado Corriente	9.299
- Resultado Extraordinario	--	- Resultado Extraordinario	--
- Modif.Obligaciones y Dchos.	--	- Modif.Obligaciones y Dchos.	--
Saldo Acreedor	**445**	**Saldo Deudor**	
TOTAL	**9.299**	**TOTAL**	**9.299**

Anexo VI-4.7
1990

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA U.N.E.D
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	31/12/90	PASIVO	31/12/90
Inmovilizado	6.965	Patrimonio y reservas	7.198
Existencias	1.062	Subvenciones capital	746
Deudores	676	Deudas medio y largo plazo	--
Partidas pendientes aplicación	189	Deudas corto plazo	938
Cuentas financieras	1.239	Partidas pendientes aplicación	106
Resultados		Resultados	1.143
TOTAL ACTIVO	**10.131**	**TOTAL PASIVO**	**10.131**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA U.N.E.D
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

DEBE	31/12/90	HABER	31/12/90
Existencias iniciales	810	Existencias finales	1.062
Compras	--	Ventas	3.991
Gastos Personal y Prest.Sociales	4.741	Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.	33
TSSE y Tributos	1.519	Subv.Explot.y Transf.Corrientes	3.691
Subv.Explot. y Transf.corrientes	595	Otros Ingresos	30
Transferencias Capital	--		
Otros Gastos	--		
Dotación Amortización	--		
Total DEBE		**Total HABER**	
- Resultado Corriente	7.665	- Resultado Corriente	8.807
- Resultado Extraordinario	--	- Resultado Extraordinario	--
- Modif.Obligaciones y Dchos.	1	- Modif.Obligaciones y Dchos.	2
Saldo Acreedor	**1.143**	**Saldo Deudor**	
TOTAL	**8.809**	**TOTAL**	**8.809**

Anexo VI-4.8
1990

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

ACTIVO	31/12/90	PASIVO	31/12/90
Inmovilizado	20.253	Patrimonio y reservas	17.807
Existencias	--	Subvenciones capital	4.140
Deudores	1.689	Deudas medio y largo plazo	--
Partidas pendientes aplicación	150	Deudas corto plazo	1.143
Cuentas financieras	1.641	Partidas pendientes aplicación	--
Resultados		Resultados	643
TOTAL ACTIVO	**23.733**	**TOTAL PASIVO**	**23.733**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
EJERCICIO 1990
(En millones de pesetas)

DEBE	31/12/90	HABER	31/12/90
Existencias iniciales	--	Existencias finales	--
Compras	--	Ventas	2.385
Gastos Personal y Prest.Sociales	8.950	Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.	156
TSSE y Tributos	2.225	Subv.Explot.y Transf.Corrientes	8.460
Subv.Explot. y Transf.corrientes	40	Otros Ingresos	1
Transferencias Capital	--		
Otros Gastos	--		
Dotación Amortización	--		
Total DEBE		**Total HABER**	
- Resultado Corriente	11.215	- Resultado Corriente	11.002
- Resultado Extraordinario	--	- Resultado Extraordinario	--
- Modif.Obligaciones y Dchos.	--	- Modif.Obligaciones y Dchos.	--
Saldo Acreedor		**Saldo Deudor**	**213**
TOTAL	**11.215**	**TOTAL**	**11.215**

SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO-1990

ANEXO 1

LIQUIDACIÓN DE RECURSOS Y APLICACIONES DEL SISTEMA

(En millones de pesetas)

Concepto	Recursos Presupuestados	Recursos realizados	Diferencia	Índice de Realiz. Ppto.
Cotizaciones sociales	4.457.219	4.550.408	93.189	102,09
Tasas y otros ingresos	96.621	114.423	17.802	118,42
Transferencias corrientes	1.809.253	2.003.041	193.788	110,71
Ingresos patrimoniales y aplicaciones	28.444	23.107	(5.337)	81,24
Total operaciones corrientes.	6.391.537	6.690.979	299.442	104,68
Enajenación de inversiones	6.311	246	(6.065)	3,90
Transferencias de capital	47.672	47.871	199	100,42
Activos financieros	8.814	35.507	26.693	402,85
Total operaciones capital	62.797	83.624	20.827	133,17
TOTAL RECURSOS NETOS	6.454.334	6.774.603	320.269	104,96

ANEXO 2

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL SISTEMA

(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto total	Obligaciones reconocidas	Índice de realiz. ppto.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	s/Total Obligac
Prestaciones económicas	4.236.802	108.207	4.345.009	4.286.254	98,65	63,49
Asistencia sanitaria	1.844.178	234.522	2.078.700	2.063.436	99,27	30,57
Servicios sociales	162.561	28.197	190.758	181.017	94,89	2,68
Administración	88 751	8.196	96.947	88.732	91,53	1,31
Total operaciones corrientes	6 332.292	379.122	6.711.414	6.619.439	98,63	98,05
Inversiones reales	89 952	12.675	102.627	88.418	86,15	1,31
Transferencias de capital	991	135	1.126	1.033	91,74	0,02
Activos y pasivos financieros	31 099	27.635	58.734	41.964	71,45	0,62
Total operaciones de capital	122 042	40 445	162.487	131.415	80,88	1,95
TOTAL PRESUPUESTO NETO	6 454 334	419 567	6.873.901	6.750.854	98,21	100

ANEXO 3

LIQUIDACIÓN DE RECURSOS Y APLICACIONES DE EE.GG. Y SERVICIO COMÚN
(En millones de pesetas)

Concepto	Recursos presupuestados	Recursos Realizados	Diferencia	Índice Realiz. Ppto.
Cotizaciones sociales	4.210.898	4.272.970	62.072	101,47
Tasas y otros ingresos	96.124	115.538	19.414	120,19
Transferencias corrientes	1.934.876	2.135.885	201.009	110,38
Ingresos patrimoniales y aplicaciones	11.232	1.198	(10.034)	10,66
Total operaciones corrientes	6.253.130	6.525.591	272.461	104,35
Enajenación de inversiones	6.282	239	(6.043)	3,80
Transferencias de capital	47.672	47.871	199	100,41
Activos financieros	32.345	2.384	(29.961)	7,37
Total operaciones capital	86.299	50.494	(35.805)	58,51
TOTAL RECURSOS	6.339.429	6.576.085	236.656	103,73

ANEXO 4

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DE EE.GG. Y SERVICIO COMÚN
(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto total	Obligaciones reconocidas	Índice de Realiz. ppto.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	s/Total Oblig.
Prestaciones económicas	4.201.771	95.288	4.297.059	4.238.910	98,65	64,29
Asistencia sanitaria	1.815.929	224.973	2.040.902	2.027.688	99,35	30,75
Servicios sociales	159.736	27.683	187.418	178.375	95,17	2,70
Administración	75.694	3.741	79.436	62.420	78,58	0,95
Total operaciones corrientes	6.253.130	351.685	6.604.815	6.507.393	98,52	98,69
Inversiones reales	82.844	10.175	93.019	82.805	89,02	1,26
Transferencias de capital	991	135	1.126	1.033	91,74	0,02
Activos y pasivos financieros	2.464	17	2.481	2.085	84,04	0,03
Total operaciones de capital	86.299	10.327	96.626	85.923	88,92	1,31
TOTAL PRESUPUESTO	6.339.429	362.012	6.701.441	6.593.316	98,39	100

ANEXO V
1990

MODIFICACIONES DE LOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO

(En millones de pesetas)

	INSS	INSALUD	INSER-SO	ISM	T.G.	TOTAL
A) Por funciones						
Créditos Iniciales	4.120.988	1.851.144	169.250	108.520	89.527	6.339.429
Variaciones:						
Prestaciones Económicas	93.662	-	-	1.219	406	95.287
Asistencia Sanitaria	-	224.793	-	180	-	224.973
Servicios Sociales	-	-	27.640	42	-	27.682
Administración General	-	-	-	-74	3.816	3.742
Inversiones Reales	-	8.616	1.531	29	-	10.176
Transferencias Capital	-	-	135	-	-	135
Activos Financieros	-	-	-	-	15	15
Pasivos Financieros	-	-	-	2	-	2
Total Variaciones	93.662	233.409	29.306	1.398	4.237	362.012
CRÉDITOS TOTALES	**4.214.650**	**2.084.553**	**198.556**	**109.918**	**93.764**	**6.701.441**
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**4.156.501**	**2.065.984**	**187.435**	**107.385**	**76.011**	**6.593.316**
PORCENTAJE REALIZACIÓN	**98,62**	**99,11**	**94,40**	**97,70**	**81,07**	**98,39**
B) Por tipos						
Créditos Iniciales	4.120.988	1.851.144	169.250	108.520	89.527	6.339.429
Variaciones:						
Créditos Extraordinarios	-	-	-	-	-	-
Suplementos de Crédito	-	-	1.638	-	-	1.638
Ampliaciones de Créditos	93.662	147.710	25.775	1.275	4.237	272.659
Ctos. generados ingresos	-	77.583	327	21	-	77.931
Incorporación de remanentes de créditos	-	8.116	1.566	102	-	9.784
Total Variaciones	93.662	233.409	29.306	1.398	4.237	362.012
CRÉDITOS TOTALES	**4.214.650**	**2.084.553**	**198.556**	**109.918**	**93.764**	**6.701.441**
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**4.156.501**	**2.065.984**	**187.435**	**107.385**	**76.011**	**6.593.316**
PORCENTAJE REALIZACIÓN	98,62	99,11	94,40	97,70	81,07	98,39

ANEXO VI
1990

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO POR GRUPOS DE PROGRAMAS

(En millones de pesetas)

	Presupuesto aprobado	Dotaciones definitivas de créditos	Realizaciones	% Ejecución
a) INSS				
11. Pensiones	3.718.118	3.749.602	3.719.860	99,21
12. Subs.Incapac.Tempor.y otras prestac.económ.	372.423	434.601	410.355	94,42
13. Adm.Serv G.y Cont.Int.de prestac.económic.	30.447	30.447	26.286	86,33
TOTAL	**4.120.988**	**4.214.650**	**4.156.501**	**98,62**
b) INSALUD				
21. Atención Primaria de Salud	289.234	361.242	357.024	98,83
22. Atención Especializada	614.964	648.408	640.068	98,71
24. Investigación Sanitaria	4.169	4.282	4.135	96,57
25. Adm.Serv.G.y Cont.Int.Asist.Sanitaria	23.751	23.577	22.249	94,37
26. Formación de pers. Sanitario	15.858	15.346	14.912	97,17
27. Transferencias a CC.AA.Serv.Sanitarios	903.168	1.031.698	1.027.596	99,60
TOTAL	**1.851.144**	**2.084.553**	**2.065.984**	**99,11**
c) INSERSO				
31. Atención a minusválidos	79.806	104.925	100.057	95,36
32. Atención a la tercera edad	30.279	31.781	27.649	87,00
33. Otros servicios sociales	9.572	9.545	8.853	92,75
34. Adm. Serv. G. y Cont. Int.serv. sociales	9.032	9.091	7.662	84,28
35. Transferencias a CC. AA.serv.social.asumidos	40.561	43.214	43.214	100
TOTAL	**169.250**	**198.556**	**187.435**	**94,40**
d) I.S.M.				
11. Pensiones	79.722	79.767	79.349	99,48
12. Subsid.Incapac.Tempor y otras prest.económic.	7.500	8.675	8.338	96,12
21. Atención Primaria de Salud	4.143	4.244	3.996	94,16
22. Atención especializada	4.591	4.687	4.491	95,82
23. Medicina marítima	1.157	1.140	940	82,46
33. Otros Servicios Sociales	4.065	4.126	3.568	86,48
41. Gestión de Tesorería	477	448	366	81,70
44. Adm.Serv.G.y Cont.Int.Tes.o serv.funcion.com.	6.865	6.831	6.337	92,77
TOTAL	**108.520**	**109.918**	**107.385**	**97,70**
e) T.G.S.S.				
12. Subs.de Incapac.Tempor. y otras prest.económ.	2.267	2.674	2.488	93,04
41. Gestión de Tesorería	41.389	45.636	42.844	93,88
42. Gestión del Patrimonio de la Seg.Social	12.465	12.465	1.546	12,40
43. Apoyo Inform.a la Gestión Seg.Social	18.282	18.340	17.055	92,99
44. Adm.Serv.G.y Cont.Int.Tesor.o Serv.fun.com	15.124	14.649	12.078	82,45
TOTAL	89.527	93.764	76.011	81,07

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL INSS

ANEXO 7

(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto total	Obligaciones reconocidas	Índice de realiz. ppto.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	s/Total Oblig.
Prestaciones económicas	4.112.281	93.662	4.205.943	4.148.736	98,64	99,82
Asistencia sanitaria	–	–	–	–	–	–
Servicios sociales	–	–	–	–	–	–
Administración	–	–	–	–	–	–
Total operaciones corrientes	4.112.281	93.662	4.205.943	4.148.736	98,64	99,82
Inversiones reales	8.262	–	8.262	7.341	88,85	0,18
Transferencias de capital	–	–	–	–	–	–
Activos y pasivos financieros	445	–	445	424	95,28	0,01
Total operaciones de capital	8.707	–	8.707	7.765	89,18	0,19
TOTAL PRESUPUESTO NETO	4.120.988	93.662	4.214.650	4.156.501	98,62	100

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL INSALUD

ANEXO 8

(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto total	Obligaciones reconocidas	Índice de realiz. ppto.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	s/Total Oblig.
Prestaciones económicas	–	–	–	–	–	–
Asistencia sanitaria	1.806.051	224.793	2.030.844	2.018.273	99,38	97,70
Servicios sociales	–	–	–	–	–	–
Administración	–	–	–	–	–	–
Total operaciones corrientes	1.806.051	224.793	2.030.844	2.018.273	99,38	97,70
Inversiones reales	43.893	8.616	52.509	46.768	89,07	2,26
Transferencias de capital	–	–	–	–	–	–
Activos y pasivos financieros	1.200	–	1.200	943	78,58	0,04
Total operaciones de capital	45.093	8.616	53.709	47.711	88,83	2,30
TOTAL PRESUPUESTO NETO	1.851.144	233.409	2.084.553	2.065.984	99,11	100

ANEXO 9

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL INSERSO

(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto total	Obligaciones reconocidas	Índice de realiz. ppto.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	s/Total Oblig.
Prestaciones económicas	–	–	–	–	–	–
Asistencia sanitaria	–	–	–	–	–	–
Servicios sociales	156.854	27.640	184.494	175.814	95,30	93,80
Administración	–	–	–	–	–	–
Total operaciones corrientes	156.854	27.640	184.494	175.814	95,30	93,80
Inversiones reales	11.593	1.531	13.124	10.729	81,75	5,73
Transferencias de capital	610	135	745	739	99,19	0,39
Activos y pasivos financieros	193	–	193	153	79,27	0,08
Total operaciones de capital	12.396	1.666	14.062	11.621	82,64	6,20
TOTAL PRESUPUESTO	169.250	29.306	198.556	187.435	94,40	100

ANEXO X
1990

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL I.S.M.

(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto total	Obligaciones reconocidas	Índice de realiz. ppto.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	s/Total Oblig.
Prestaciones económicas	87.222	1.219	88.441	87.687	99,15	81,66
Asistencia sanitaria	9.878	180	10.058	9.414	93,60	8,76
Servicios sociales	2.882	42	2.924	2.560	87,55	2,38
Administración	5.945	(74)	5.871	5.426	92,42	5,06
Total operaciones corrientes	**105.927**	**1.367**	**107.294**	**105.087**	**97,94**	**97,86**
Inversiones reales	2.086	29	2.115	1.893	89,50	1,76
Transferencias de capital	381	--	381	294	77,17	0,27
Activos y pasivos financieros	126	2	128	111	86,72	0,11
Total operaciones de capital	**2.593**	**31**	**2.624**	**2.298**	**87,58**	**2,14**
TOTAL PRESUPUESTO	**108.520**	**1.398**	**109.918**	**107.385**	**97,70**	**100**

ANEXO XI
1990

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto total	Obligaciones reconocidas	Índice de realiz. ppto.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	s/Total Oblig.
Prestaciones económicas	2.268	406	2.674	2.488	93,04	3,27
Asistencia sanitaria	--	--	--	--	--	--
Servicios sociales	--	--	--	--	--	--
Administración	69.749	3.816	73.565	56.993	77,47	74,98
Total operaciones corrientes	**72.017**	**4.222**	**76.239**	**59.481**	**78,02**	**78,25**
Inversiones reales	17.010	--	17.010	16.076	94,95	21,16
Transferencias de capital	--	--	--	--	--	--
Activos y pasivos financieros	500	15	515	454	88,16	0,59
Total operaciones de capital	**17.510**	**15**	**17.525**	**16.530**	**94,32**	**21,75**
TOTAL PRESUPUESTO	**89.527**	**4.237**	**93.764**	**76.011**	**81,07**	**100**

ANEXO XII.1
1990

BALANCE AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

(En pesetas)

ACTIVO

(1) Nº.CTA.	(2) CONCEPTO	(3) BALANCE AGREGADO SEGÚN MATEP	(4) BALANCE AGREGADO SEGÚN M.T. Y SS	(5) BALANCE AGREGADO MUTUAS ABSORBIDAS	(6) BALANCE DEPURADO M.T. Y SS. (4-5)	(7) DIFERENCIA (3-6)
200	INMUEBLES	14.081.591.738.-	14.081.591.738.-	--	14.081.591.738.-	--
250	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1.896.136.928.-)	(1.896.136.928.-)	--	(1.896.136.928.-)	--
201	TERRENOS Y SOLARES	289.851.390.-	289.851.390.-	--	289.851.390.-	--
202	INSTALACIONES	11.976.103.179.-	11.977.411.080.-	1.307.901.-	11.976.103.179.-	--
251	AMORTIZACION ACUMULADA	(6.449.856.015.-)	(6.450.833.242.-)	(977.227.-)	(6.449.856.015.-)	--
203	MOBILIARIO Y MATERIAL NO MÓVIL	14.700.394.089.-	14.713.463.497.-	13.069.408.-	14.700.394.089.-	--
252	AMORTIZACION ACUMULADA	(6.521.181.174.-)	(6.528.068.222.-)	(6.887.048.-)	(6.521.181.174.-)	--
204	MATERIAL MÓVIL	1.397.651.835.-	1.405.299.989.-	7.648.154.-	1.397.651.835.-	--
253	AMORTIZACION ACUMULADA	(908.424.631.-)	(912.887.131.-)	(4.462.500.-)	(908.424.631.-)	--
210	INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN	93.608.-	93.608.-	--	93.608.-	--
211	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CURSO	257.880.695.-	257.880.695.-	--	257.880.695.-	--
212	INSTALACIONES EN MONTAJE	35.664.884.-	35.664.884.-	--	35.664.884.-	--
223	PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS	1.605.052.472.-	1.612.801.072.-	7.748.600.-	1.605.052.472.-	--
230	FIANZAS CONSTITUIDAS	550.249.701.-	551.329.381.-	1.079.680.-	550.249.701.-	--
231	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	4.485.492.289.-	4.492.912.273.-	7.419.984.-	4.485.492.289.-	--
300	EXISTENCIAS	805.844.182.-	805.844.182.-	--	805.844.182.-	--
420	DEUDORES DIVERSOS	5.940.960.061.-	5.955.736.146.-	--	5.955.736.146.-	(14.776.085.-)
421	DEUDORES POR PRESTACIONES	1.316.604.899.-	1.303.534.387.-	1.705.573.-	1.301.828.814.-	14.776.085.-
423	DEUDORES POR PRESTACIONES ANTICIPADAS	13.576.573.-	13.576.573.-	--	13.576.573.-	--
424	ANTICIPOS AL PERSONAL	116.183.505.-	116.183.505.-	--	116.183.505.-	--
430	PAGOS ANTICIPADOS	160.418.980.-	160.418.980.-	--	160.418.980.-	--
435	COBROS DIFERIDOS	621.374.001.-	621.374.001.-	--	621.374.001.-	--
500	CAJA	122.716.802.-	123.451.898.-	735.096.-	122.716.802.-	--
501	BANCOS Y CAJAS DE AHORRO CTAS.VISTA	30.630.688.672.-	30.786.469.668.-	155.780.996.-	30.630.688.672.-	--
511	VALORES MOBILIARIOS AMORTIZADOS	43.748.828.-	43.748.828.-	--	43.748.828.-	--
512	RENTAS E INTERESES A COBRAR	288.289.567.-	288.289.567.-	--	288.289.567.-	--
530	VALORES MOBILIARIOS	56.648.313.976.-	56.730.310.786.-	81.996.810.-	56.648.313.976.-	--
532	PRESTAMOS AL PERSONAL	330.387.264.-	330.387.264.-	--	330.387.264.-	--
533	IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	8.175.977.980.-	8.203.127.980.-	27.150.000.-	8.175.977.980.-	--
534	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS	10.687.513.273.-	10.687.513.273.-	--	10.687.513.273.-	--
540	ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SS.c/c	12.665.935.523.-	12.682.432.964.-	16.497.441.-	12.665.935.523.-	--
547	ENTIDADES FILIALES c/c	1.342.237.327.-	1.348.307.383.-	6.070.056.-	1.342.237.327.-	--
548	OTRAS CUENTAS	998.630.818.-	998.630.818.-	--	998.630.818.-	--
549	OPERACIONES EN CURSO	3.317.752.293.-	3.317.752.293.-	--	3.317.752.293.-	--
550	DEUDORES FINANCIEROS POR ANTICIPOS INTERNOS	20.766.227.-	20.766.227.-	--	20.766.227.-	--
561	RENTAS E INTERESES A COBRAR NO VENCIDOS	598.612.608.-	598.405.374.-	--	598.405.374.-	207.234.-
170	DÉFICIT DE GESTION	244.034.026.-	260.153.126.-	15.911.866.-	244.241.260.-	(207.234.-)
171	RESULTADOS A REGULARIZAR	150.328.902.-	150.328.902.-	--	150.328.902.-	--
0000	CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES	79.350.100.981.-	79.398.654.302.-	48.553.321.-	79.350.100.981.-	--
	TOTAL	248.195.424.400.-	248.575.772.511.-	380.348.111.-	248.195.424.400.-	--

ANEXO XII.2
1990

BALANCE AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

(En pesetas)

PASIVO

(1) N°.CTA.	(2) CONCEPTO	(3) BALANCE AGREGADO SEGÚN MATEP	(4) BALANCE AGREGADO SEGÚN M.T. Y SS	(5) BALANCE AGREGADO MUTUAS ABSORBIDAS	(6) BALANCE DEPURADO M.T. Y SS. (4-5)	(7) DIFERENCIA (3-6)
112	FONDO DE RESERVA	43.115.567.-	43.115.567.-	--	43.115.567.-	--
113	FONDO DE ESTABILIZACIÓN	28.548.925.826.-	28.591.985.242.-	43.059.416.-	28.548.925.826.-	--
114	FONDO ESPECIAL DE EXCEDENTES	6.473.679.996.-	6.506.899.475.-	33.219.479.-	6.473.679.996.-	--
115	RESERVA PARA OBLIGACIONES INMEDIATAS	34.053.581.824.-	34.102.796.893.-	49.215.069.-	34.053.581.824.-	--
116	RESERVA PARA CONTINGENCIAS PTES.LIQUIDACIÓN	50.262.177.397.-	50.366.952.086.-	104.774.689.-	50.262.177.397.-	--
1.171	FONDO PREV.Y REHAB.INMOVILIZADO EN ACTIVO	9.589.685.756.-	9.598.083.569.-	8.397.813.-	9.589.685.756.-	--
1.172	FONDO PREV.Y REHAB.PTE.-REMESA BCO. ESPAÑA	7.173.018.519.-	7.180.849.550.-	7.831.031.-	7.173.018.519.-	--
122	FONDO ASISTENCIA SOCIAL A.T.	5.685.267.045.-	5.731.081.114.-	45.814.069.-	5.685.267.045.-	--
123	RESERVA DE AUTOSEGURO	957.204.258.-	957.204.258.-	--	957.204.258.-	--
140	PRESTAMOS RECIBIDOS	258.988.070.-	258.988.070.-	--	258.988.070.-	--
181	RESERVA DE REVALORIZACIÓN ACTIVO FIJO 1983	1.895.136.591.-	1.895.136.591.-	--	1.895.136.591.-	--
182	RVA.DE ACTUALIZACIÓN CARTERA VALORES 1983	310.987.199.-	310.987.199.-	--	310.987.199.-	--
400	PROVEEDORES	918.013.187.-	918.013.187.-	--	918.013.187.-	--
410	ACREEDORES DIVERSOS	1.960.008.909.-	1.960.008.909.-	--	1.960.008.909.-	--
411	IMPUESTOS Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	1.713.334.263.-	1.716.716.525.-	3.382.262.-	1.713.334.263.-	--
412	ACREEDORES POR PRESTACIONES	10.494.660.868.-	10.502.085.351.-	7.424.483.-	10.494.660.868.-	--
413	OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	1.296.085.950.-	1.296.085.950.-	--	1.296.085.950.-	--
431	PAGOS DIFERIDOS	4.100.104 867.-	4.112.853.759.-	12.748.892.-	4.100.104.867.-	--
434	COBROS ANTICIPADOS	5.707.231.-	5.707.231.-	--	5.707.231.-	--
436	RECIBOS PENDIENTES DE COBRO	564.606.465.-	564.606.465.-	--	564.606.465.-	--
520	FIANZAS RECIBIDAS	3.228.632.-	3.228.632.-	--	3.228.632.-	--
521	DEPÓSITOS RECIBIDOS	50.353.850.-	50.353.850.-	--	50.353.850.-	--
540	ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SEG.SOCIAL C/C.	398.327.800.-	398.327.800.-	--	398.327.800.-	--
542	ENTES AUTONÓMICOS	--	3.976.673.-	3.976.673.-	--	--
547	ENTIDADES FILIALES C/C	46.010.847.-	46.010.847.-	--	46.010.847.-	--
548	OTRAS CUENTAS	219.560.526.-	231.128.391.-	11.567.865.-	219.560.526.-	--
549	OPERACIONES EN CURSO	39.754.072.-	39.754.072.-	--	39.754.072.-	--
560	RENTAS E INTERESES A PAGAR NO VENCIDOS	23.429.945.-	24.226.671.-	--	24.226.671.-	(796.726.-)
563	RENTAS E INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	1.423.939.218.-	1.423.142.492.-	--	1.423.142.492.-	796.726.-
171	RESULTADOS A REGULARIZAR	336.428.741.-	336.811.790.-	383.049.-	336.428.741.-	--
0000	CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES	79.350.100.981.-	79.398.654.302.-	48.553.321.-	79.350.100.981.-	--
	TOTAL	248.195.424.400.-	248.575.772.511.-	380.348.111.-	248.195.424.400.-	--

ANEXO 13

LIQUIDACIÓN DE RECURSOS Y APLICACIONES DE MUTUAS DE A.T. y E.P.
(En millones de pesetas)

Concepto	Recursos Presupuestados	Recursos Realizados	Diferencia	Índice real pp
Cotizaciones sociales	246.321	277.438	31.117	112,
Tasas y otros ingresos	2.781	3.116	335	112,
Transferencias corrientes	–	3	3	-
Ingresos patrimoniales y aplicaciones	17.212	21.909	4.697	127,
Total operaciones corrientes	266.314	302.466	36.152	113,
Enajenación de inversiones	29	7	(22)	24,
Transferencias de capital	–	–	–	-
Activos financieros	35.714	45.528	9.814	127,
Total operaciones capital	35.743	45.535	9.792	127,
TOTAL RECURSOS	302.057	348.001	45.944	115,

ANEXO XIV
1990

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DE MUTUAS DE A.T. y E.P.
(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales	**Presupuesto inicial**	**Modificaciones**	**Presupuesto total**	**Obligaciones reconocidas**	**Índice de realiz. ppto.**	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	s/Total Oblig.
Prestaciones económicas	161.327	31.137	192.464	182.162	94,65	52,34
Asistencia sanitaria	48.826	10.958	59.784	56.177	93,97	16,14
Servicios sociales	4.146	532	4.678	3.958	84,61	1,14
Administración	52.015	11.186	63.201	60.254	95,34	17,31
Total operaciones corrientes	**266.314**	**53.813**	**320.127**	**302.551**	**94,51**	**86,93**
Inversiones reales	7.108	2.500	9.608	5.612	58,41	1,61
Transferencias de capital	--	--	--	--	--	--
Activos y pasivos financieros	28.635	27.618	56.253	39.880	70,89	11,46
Total operaciones de capital	**35.743**	**30.118**	**65.861**	**45.492**	**69,07**	**13,07**
TOTAL PRESUPUESTO	**302.057**	**83.931**	**385.988**	**348.043**	**90,17**	**100**

ANEXO XV
1990

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. Y DEL SISTEMA

(En millones de pesetas)

Ppto. de gastos	M.A.T.E.P. (1)		Sistema (2)		Por fiscalización MATEP en el Sistema SS (%)	
	Presupuesto inicial	Obligaciones reconocidas	Presupuesto inicial	Obligaciones reconocidas	Presupuesto inicial	Obligaciones reconocidas
- Capítulos 1 al 4	237.053	267.905	6.460.198	6.756.138	3,67	3,97
- Amortizaciones	2.775	2.609	22.249	21.768	12,47	11,99
- Reservas (art.51)	26.486	32.038	36.997	32.038	71,59	100,00
- Inversiones reales	7.108	5.612	89.952	88.417	7,90	6,35
- Transf. de capital	--	--	991	1.033	--	--
- Activos financieros	28.635	39.879	30.984	41.893	92,42	95,19
- Pasivos financieros	--	--	115	72	--	--
TOTAL	**302.057**	**348.043**	**6.641.486**	**6.941.359**	**4,55**	**5,01**

Ppto. de recursos	M.A.T.E.P. (1)		Sistema (2)		% 1:2	
	Presupuesto inicial	Recursos realizados	Presupuesto inicial	Recursos realizados	Presupuesto inicial	Recursos realizados
- Capítulos 1 al 5 (exc. art. 56)	258.040	290.878	6.511.170	6.816.469	3,96	4,27
- Aplicaciones Tesorería por op.corrientes (a.56)	8.274	11.588	8.274	11.588	100,00	100,00
- Enajenac. Inversiones	29	7	6.311	246	0,46	2,85
- Transf.capital	-	-	47.672	47.871	-	-
- Activos financieros (a. 80 a 87)	1.635	32.551	3.995	34.935	40,93	93,18
- Aplicac. reservas (ejerc. ant.(c.880)	4.818	572	4.818	572	100,00	100,00
- Aplicac. amortización del ejercicio (c.881)	2.775	2.130	22.249	2.130	12,47	100,00
- Aplicac. excedente corriente (c. 882)	26.486	10.275	36.997	10.275	71,59	100,00
TOTAL	**302.057**	**348.001**	**6.641.485**	**6.924.086**	**4,55**	**5,03**

ANEXO XVI
1990

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN RENDIDA POR LAS MISMAS Y SEGÚN LOS DATOS FACILITADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

(En pesetas)

A) PRESUPUESTO DE GASTOS

	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. final	Oblig. reconocidas	Remanente
Op.corrientes					
. M.A.T.E.P.	266.314.132.000	54.390.958.300	320.705.090.300	300.773.488.740	19.931.601.560
. M° T. y S.S.	266.314.011.000	53.813.070.432	320.127.081.432	302.551.469.069	17.575.612.363
. Diferencia	121.000	577.887.868	578.008.868	(1.777.980.329)	2.355.989.197
Op. capital					
. M.A.T.E.P.	35.742.933.000	30.092.228.721	65.835.161.721	45.484.467.455	20.350.694.266
. M° T. y S.S.	35.742.933.000	30.117.883.295	65.860.816.295	45.491.707.455	20.369.108.840
. Diferencia	--	(25.654.574)	(25.654.574)	(7.240.000)	(18.414.574)
Total Ppto.Gastos					
. M.A.T.E.P.	302.057.065.000	84.483.187.021	386.540.252.021	346.257.956.195	40.282.295.826
. M° T. y S.S.	302.056.944.000	83.930.953.727	385.987.897.727	348.043.176.524	37.944.721.203
. Diferencia	**121.000**	**552.233.294**	**552.354.294**	**(1.785.220.329)**	**2.337.574.623**

B) PRESUPUESTO DE RECURSOS

	Ppto. inicial	Recursos realizados	Diferencia
Op.corrientes			
. M.A.T.E.P.	266.564.283.000	300.999.878.104	(34.435.595.104)
. M°.	266.314.011.000	302.465.763.018	(36.151.752.018)
. Diferencia	250.272.000	(1.465.884.914)	1.716.156.914
Op.capital			
. M.A.T.E.P.	35.696.264.854	45.661.289.930	(9.965.025.076)
. M°.	35.742.933.000	45.535.303.318	(9.792.370.318)
. Diferencia	(46.668.146)	125.986.612	(172.654.758)
Total ppto. recursos			
. M.A.T.E.P.	302.260.547.854	346.661.168.034	(44.400.620.180)
. M°.	302.056.944.000	348.001.066.336	(45.944.122.336)
. Diferencia	**203.603.854**	**(1.339.898.302)**	**1.543.502.156**

ANEXO 17

CORRESPONDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO CON LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CUENTA DE CAPITAL SEGÚN DATOS FACILITADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDA SOCIAL.

(En millones de pesetas)

	(1) Debe Cta.Capital	(2) Obligac.reconocidas	(1-2) Diferencia
. Inmovilizado material	5.617,00	5.612,00	5,0
. Fianzas	186,00	32,00	154,
. Depósitos	1.363,00	1.418,00	(55,0
. Inversiones financieras	40.089,00	38.430,00	1.659,
T O T A L	47.255,00	45.492,00	1.763,

	(1) Haber Cta.Capital	(2) Recursos realizados	(1-2) Diferencia
. Inmovilizado material	3,00	7,00	(4,00
. Fianzas	18,00	31,00	(13,00
. Depósitos	668,00	700,00	(32,00
. Valores mobiliarios	33.618,00	31.820,00	1.798,00
T O T A L	34.307,00	32.558,00	1.749,00

ANEXO 18

CUENTA DE GESTION DELAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN RENDIDA POR LAS MISMAS Y SEGÚN LOS DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(En millones de pesetas)

	(1) Mutuas	(2) M°.Trabajo y Seguridad Social	(1-2) Diferencias
GASTOS			
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			
· Prestac.económicas directas	49.627	48.268	1.359
· Asistencia sanitaria	50.016	53.283	(3.267)
· Servicios sociales	6.682	3.959	2.723
· Gastos generales y otros	28.471	28.469	2
· Transf.internas Sist.S.Social	135.641	136.535	(894)
· Transf.externas por op.cies	7	–	7
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	270.444	270.514	(70)
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS			
· Perdidas en enajenación	22	21	1
· Otros gastos	–	54	(54)
TOTAL GASTOS EXTRAPRESUPUEST	22	75	(53)
TOTAL GASTOS	270.466	270.589	(123)
APLICACIÓN DE RESULTADOS			
· Reservas	30.257	30.257	–
· Otras reservas	871	871	–
· Resultados acumulados	910	910	–
TOTAL	302.504	302.627	(123)
INGRESOS			
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			
· Cuotas	277.438	277.438	–
· Rentas e int.del patrimonio	10.085	10.321	(236)
· Transf.internas Sist.Seg.Soc.	444	339	105
· Transferencias externas	1	–	1
· Ingresos por serv.prestados	2.698	2.780	(82)
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	290.666	290.878	(212)
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS			
· B° en amortiz.o venta valores	337	100	237
· B° en enajenac.inmov.material	1	1	–
· Otros ingresos	–	25	(25)
TOTAL INGRESOS EXTRAPRESUPUEST	338	126	212
TOTAL INGRESOS	291.004	291.004	–
ORIGEN DE RESULTADOS			
· Reservas	11.052	11.052	–
· Otras reservas	175	298	(123)
· Resultados acumulados	273	273	–
TOTAL	302.504	302.627	(123)

ANEXO 19

CONTRATOS DE OBRAS

Entidad	Subasta				Concurso				Contratación directa				TOTAL			
	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%
Tesorería	21	68	4.366.198.198	67	1	3	750.000.000	11	9	29	1.410.134.640	22	31	100	6.526.332.838	100
INSALUD	25	22	1.346.653.666	6	51	45	18.860.457.030	82	37	33	2.747.110.182	12	113	100	22.954.220.878	100
INSS	28	82	2.347.919.249	94	-	-	-	-	6	18	151.748.918	6	34	100	2.499.668.167	100
INSERSO	23	47	3.300.988.732	29	9	18	6.394.495.667	56	17	35	1.770.338.253	15	49	100	11.465.822.652	100
ISM	6	75	321.295.330	66	-	-	-	-	2	25	165.248.813	34	8	100	486.544.143	100
TOTAL	103	44	11.683.055.175	27	61	26	26.004.952.697	59	71	30	6.244.580.806	14	235	100	43.932.588.678	100

ANEXO 20

CONTRATOS DE SERVICIOS (1)

Entidad	Subasta				Concurso				Contratación directa				TOTAL			
	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%
Tesorería	-	-	--	-	17	26	1.367.310.506	31	48	74	2.999.875.621	69	65	100	4.367.186.127	100
INSALUD	-	-	--	-	53	82	6.592.939.368	93	12	18	524.218.051	7	65	100	7.117.157.419	100
INSS	1	6	55.022.470	6	9	56	720.791.622	74	6	38	197.979.906	20	16	100	973.793.998	100
INSERSO	-	-	--	-	7	78	5.116.834.768	96	2	22	239.186.355	4	9	100	5.356.021.123	100
TOTAL	1	1	55.022.470	1	86	55	13.797.876.264	77	68	44	3.961.259.933	22	155	100	17.814.158.667	100

(1) Se incluyen en este apartado los contratos de adquisición y arrendamiento de inmuebles celebrados por la Tesorería General de la Seguridad Social.

ANEXO 21

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Entidad	Concurso				Contratación directa				TOTAL			
	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%
Tesorería	8	23	827.969.420	25	27	77	2.426.970.523	75	35	100	3.254.939.943	100
INSALUD	74	86	7.530.980.444	87	12	14	1.136.512.868	13	86	100	8.667.493.312	100
INSS	3	38	905.667.074	81	5	62	205.825.305	19	8	100	1.111.492.379	100
ISM	1	100	44.300.000	100	-	-	--	-	1	100	44.300.000	100
TOTAL	86	66	9.308.916.938	71	44	34	3.769.308.696	29	130	100	13.078.225.634	100

ANEXO 22

RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

TIPO DE CONTRATO	TESORERÍA				INSALUD				INSS				INSERSO				ISM				TOTALES			
	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%
Obras	31	24	6 526 332 838	46	113	43	22 954 220 878	59	34	59	2 499 668 167	55	49	84	11 465 822 652	68	8	89	486 544 143	92	235	45	43 932 588 678	59
Servicios (1)	65	49	4 367 186 127	31	65	25	7 117 157 419	19	16	27	973 793 998	21	9	16	5 356 021 123	32	-	-	-	-	155	30	17 814 158 667	24
Suministros	35	27	3 254 939 943	23	86	32	8 667 493 312	22	8	14	1 111 492 379	24	-	-	-		1	11	44 300 000	8	130	25	13 078 225 634	17
TOTAL	131	100	14 148 458 908	100	264	100	38 738 871 609	100	58	100	4 584 954 544	100	58	100	16 821 843 775	-	9	100	530 844 143	100	520	100	74 824 972 979	100

(1) Se incluyen en este apartado los contratos de adquisición y arrendamiento de inmuebles celebrados por la Tesorería General de la Seguridad Social

ANEXO 23

RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1)

Naturaleza Contrato	Forma Adjudicación	TESORERÍA				INSALUD				INSS				INSERSO				ISM				TOTALES			
		Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%	Nº	%	Importe	%
Obras	Subasta	21	68	4 166 198 198	67	25	22	1 346 653 666	6	28	82	2 347 919 249	94	23	47	3 300 988 712	29	6	75	321 295 330	66	103	44	11.683.055.175	27
	Concurso	1	3	750 000 000	11	51	45	18 860 457 030	82				-	9	18	6 394 495 667	56	-	-		-	61	26	26.004.952.697	59
	Cont.Dcto.	9	29	1 410 134 640	22	37	33	2 747 110 182	12	6	18	151 748 918	6	17	35	1 770 318 251	15	2	25	165 248 813	34	71	30	6.244.580.806	14
Total obras		31	24	6.526.332.838	46	113	43	22.954.220.878	59	34	59	2.499.668.167	55	49	84	11.465.822.652	68	8	89	486.544.143	92	235	45	43.932.588.678	59
Servicios	Subasta		-							1	6	55 022 470	6	-	-		-	-	-		-	1	1	55.022.470	1
	Concurso	17	26	1 367 310 506	31	53	82	6 592 939 368	93	9	56	720 791 622	74	7	78	5 116 834 768	96	-	-		-	86	55	13.797.876.264	77
	Cont.Dcto.	48	74	2 999 875 621	69	12	18	524 218 051	7	6	18	197 979 906	20	2	22	239 186 355	4	-	-		-	68	44	3.961.259.933	22
Total servicios		65	49	4.367.186.127	31	65	25	7.117.157.419	19	16	27	973.793.998	21	9	16	5.356.021.123	32	-	-		-	155	30	17.814.158.667	24
Suministros	Concurso	8	23	827 969 420	25	74	86	7 530 980 444	87	3	38	905 667 074	81	-	-		-	1	100	44 300 000	100	86	66	9.308.916.938	71
	Cont.Dcto.	27	77	2 426 970 523	75	12	14	1 136 512 868	13	5	62	205 825 305	19	-	-		-	-	-		-	44	34	3.769.308.696	29
Total suministros		35	27	3.254.939.943	23	86	32	8.667.493.312	22	8	14	1.111.492.379	24	-	-		-	1	11	44.300.000	8	130	25	13.078.225.634	17
TOTAL		131	100	14.148.458.908	100	264	100	38.738.871.609	100	58	100	4.584.954.544	100	58	100	16.821.843.775	100	9	100	530.844.143	100	520	100	74.824.972.979	100

(1) Este resumen contiene en el apartado de servicios los contratos de adquisición y arrendamiento de inmuebles celebrados por la Tesorería General de la Seguridad Social

ANEXO 24

RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 1989 (1)

Naturaleza Contrato	Forma Adjudicación	TESORERÍA		INSALUD		INSS		INSERSO		ISM		TOTALES	
		N°	Importe	N°	Importe	N°	Importe	N°	Importe	N°	Importe	N°	Importe
Obras	Subasta	21	1 697 111 786	25	3 018 702 777	3	161 242 635	12	1 052 867 823	7	1 389 967 942	68	7.339.894.963
	Concurso			5	2 551 243 531	2	87 966 988	1	92 841 926	-	-	8	2.732.052.447
	Cont. Dcta.	1	53 473 488	12	421 656 809		..	17	667 109 937	2	157 162 029	32	1.299.402.263
Total obras		22	1.750.587.274	42	6.011.603.119	5	249.209.623	30	1.812.819.686	9	1.547.129.971	108	11.371.349.673
Servicios	Subasta	-	-	-	-	-	..	-	..	-	..	-	..
	Concurso	5	4 481 404 094	28	6 389 617 570	6	385 437 875	5	4 253 925 352	1	37 363 800	45	15.549 768.691
	Cont. Dcta	16	2 195 785 564	10	632 962 676	2	260 540 167	-	..	-	..	28	3.089.288.407
Total servicios		21	6.679.189.658	38	7.022.600.246	8	645.978.042	5	4.253.925.352	1	37.363.800	73	18.639.057.098
Suministros	Concurso	11	4 428 714 513	79	8 196 621 355	-	-	-	..	-	..	90	12.625.337.868
	Cont. Dcta.	31	2 209 749 216	16	662 641 813	6	930 031.130	-	..	-	..	53	3.802..422.179
Total suministros		42	6.638.463.749	95	8.859.265.168	6	930.031.130	-	..	-	..	143	16.427.760.047
TOTAL		85	15.068.240.681	175	21.893.468.533	19	1.825.218.795	35	6.066.745.038	10	1.584.493.771	324	46.438.166.818

(1) Este resumen no contiene los datos referidos a los contratos de arrendamientos y adquisiciones de inmuebles

SECTOR PUBLICO TERRITORIAL

I. Comunidades Autónomas

ANEXO I-1.1

1.990

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

CUENTAS INTEGRADAS DE GASTOS

(en millones de pesetas)

Comunidades	Créditos Iniciales	Modificaciones Netas	Créditos Finales	Obligaciones Reconocidas
ANDALUCIA	1.665.103	278.261	1.943.364	1.795.952
ARAGON	60 476	43.575	104.051	63.163
CANARIAS	193.920	66.302	260.222	215.939
CANTABRIA	49.851	19.616	69.467	54.606
CASTILLA-LA MANCHA	125.595	17.699	143.294	113.732
CASTILLA Y LEON	150.404	59.862	210.266	139.139
CATALUÑA	1.087.505	140.427	1.227.932	1.187.966
EXTREMADURA	85.633	30.102	115.735	71.156
FORAL DE NAVARRA	124 476	37.856	162.332	15.116
GALICIA	364.728	60.241	424.969	355.524
ISLAS BALEARES	24 990	17.164	42.154	30.593
LA RIOJA	23.357	6.305	29.662	20.934
MADRID	379.611	72.390	452.001	380.963
PAIS VASCO	566.702	28.054	594.756	583.058
PRINCIPADO DE ASTURIAS	67.729	23.312	91.041	69.146
REGION DE MURCIA	67 141	14.865	82.006	68.396
VALENCIANA	558 055	128.132	686.187	614.282
TOTAL	4 863.071	818.811	5.681.882	5.013.467

Anexo I-1.2

1.990

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

CUENTAS INTEGRADAS DE INGRESOS

(en millones de pesetas)

Comunidades	Previsiones Iniciales	Modificaciones Netas	Previsiones Finales	Derechos Reconocidos
ANDALUCIA	1 665.103	258.036	1.923.139	1.736.514
ARAGON	60 476	43.575	104.051	80.046
CANARIAS	193.920	64.789	258.709	219.274
CANTABRIA	49.851	9.093	58.944	49.407
CASTILLA-LA MANCHA	125.595	14.761	140.356	124.518
CASTILLA Y LEON	150 404	59.061	209.465	212.119
CATALUÑA	1 087.505	4.900	1.092.405	1.177.557
EXTREMADURA	85 653	29.977	115.630	83.117
FORAL DE NAVARRA	124 476	37.856	162.332	188.636
GALICIA	364 728	4.693	369.421	350.479
ISLAS BALEARES	24 990	17.164	42.154	32.495
LA RIOJA	23.357	6.305	29.662	22.658
MADRID	379 611	72.390	452.001	380.963
PAIS VASCO	566 702	28.054	594.756	574.705
PRINCIPADO DE ASTURIAS	67 729	7.996	75.725	71.985
REGION DE MURCIA	67 141	13.506	80.647	68.793
VALENCIANA	558 055	48 520	606.575	604.738
TOTAL	4 863 091	507.360	5.370.451	5.193.161

Anexo I-2.1

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS

(en millones de pesetas)

Comunidades	Créditos Iniciales	Modificaciones Netas	Créditos Finales	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago
ANDALUCIA	1.195.199	182 743	1.377.942	1.278.737	996.546	282.191
ARAGON	60.476	43.575	104.051	63.163	60.569	2.594
CANARIAS	193.920	66 302	260.222	215.939	152.048	63.891
CANTABRIA	49.829	19 608	69.437	54.588	50.997	3.591
CASTILLA-LA MANCHA	125.595	17 699	143.294	113.732	103.852	9.880
CASTILLA Y LEON	150 404	59 862	210.266	139.139	111.230	27.909
CATALUÑA	987.971	133 007	1.120.978	1.099.968	948.109	151.859
EXTREMADURA	85.529	30 102	115 631	71.069	49.739	21.330
FORAL DE NAVARRA	124 476	37 856	162.332	151.166	114.761	36.405
GALICIA	349 874	55 549	405 423	340.682	305.609	35.073
ISLAS BALEARES	24 975	17 155	42 130	30.573	26.321	4.252
LA RIOJA	23 357	6 305	29 662	20.934	20.934	—
MADRID	217 762	28 879	246 641	200.227	159.446	40.781
PAIS VASCO	425 900	21 404	447 304	436.598	360.794	75.804
PRINCIPADO DE ASTURIAS	66 525	23 246	89 771	68 552	59.638	8.914
REGION DE MURCIA	61 927	13 978	75 905	62.995	50.913	12.082
VALENCIANA	557.239	127 625	684 864	613 217	603.577	9.640
TOTAL	4.700 958	884 895	5 585 853	4.961.279	4.175.083	786.196

Anexo I-2.2

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE CREDITOS

(en millones de pesetas)

Comunidades	Créditos Extraordinarios y Suplementarios	Aumentos de Créditos Ampliables	Transferencias de Crédito Altas	Transferencias de Crédito Bajas	Créditos Generados por Ingresos	Incorporaciones de Créditos	Otras Modificaciones Netas	Total Modificaciones
ANDALUCIA	—	18 711	83 238	83 238	88 305	77.727	—	182.743
ARAGON	14 393	1 833	6 012	6 012	727	27 814	(1.192)	43.575
CANARIAS	11 664	25 257	2 458	2 458	6 607	25.000	(2.226)	66.302
CANTABRIA	466	17	12 921	12 921	4 671	14.454	—	19.608
CASTILLA-LA MANCHA	609	628	10 130	10.130	12.900	3.562	—	17.699
CASTILLA Y LEON	3 737	1 691	9 361	9.361	9.853	47.161	(2.580)	59.862
CATALUÑA	3 000	91.198	25.578	25.578	23.070	7.801	7.938	133.007
EXTREMADURA	—	—	7 815	7.815	2.302	27.800	—	30.102
FORAL DE NAVARRA	690	32.091	15.666	15.666	2.009	3.892	(826)	37.856
GALICIA	1 850	7.453	22.327	22.327	2.880	43.371	(5)	55.549
ISLAS BALEARES	3.695	1.377	4.267	4.267	1.434	10.649	—	17.155
LA RIOJA	—	—	3.105	3.105	541	5.764	—	6.305
MADRID	—	—	10.952	14.182	959	25.928	5.222	28.879
PAIS VASCO	54	4.479	5.418	5.418	762	16.109	—	21.404
PRINCIPADO DE ASTURIAS	—	5.032	4.644	4.644	3.478	14.736	—	23.246
REGION DE MURCIA	—	1.412	2.951	2.951	5.225	7.341	—	13.978
VALENCIANA	5.907	—	19.342	1.417	43.348	77.733	(17.288)	127.625
TOTAL	46.065	189.179	246.185	231.490	209.071	436.842	(10.957)	884.895

Anexo I-2.3

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(en millones de pesetas)

Comunidades	CAP.0 Ejerc. Cerrado (Total)	CAP.1 Gastos Personal	CAP.2 Compra Bienes Serv.	CAP.3 Intere.	CAP.4 Transf. Ctes.	Total Ope. Ctes.	CAP.6 Invers. Reales	CAP.7 Transf. Capital	Total Ope. Capital	TOTAL OPS NO FINANCS.	CAP.8 Varic. Activos Financ.	CAP.9 Varic. Pasivos Financ.	TOTAL OPS. FINANCS.	TOTALES
ANDALUCIA	_	242.709	26.149	21.901	694.391	985.150	149.424	134.103	283.527	1.268.677	2.690	7.370	10.060	1.278.737
ARAGON	_	17.135	4.387	949	6.533	28.984	20.254	11.804	32.058	61.042	1.531	590	2.121	63.163
CANARIAS	_	75.740	9.810	2.978	60.361	148.889	45.303	20.049	65.352	214.241	658	1.040	1.698	215.939
CANTABRIA	_	8.240	4.777	5.567	10.099	28.683	17.782	3.760	21.542	50.225	92	4.271	4.363	54.588
CAST.-LA MANCHA	_	22.000	4.434	1.527	15.434	43.395	22.501	46.952	69.453	112.848	590	294	884	113.732
CAST.Y LEON	_	42.409	7.924	1.529	11.762	63.624	45.393	25.143	70.536	134.160	2.301	2.678	4.979	139.139
CATALUÑA	_	177.712	33.904	29.198	612.495	853.309	68.142	74.142	142.284	995.593	12.539	91.836	104.375	1.099.968
EXTREMADURA	_	15.358	3.389	413	8.297	27.457	34.330	7.267	41.597	69.054	1.735	280	2.015	71.069
FORAL DE NAVARRA	_	28.604	9.069	138	54.216	92.027	35.918	17.963	53.881	145.908	4.600	658	5.258	151.166
GALICIA	_	102.872	19.725	3.562	106.029	232.188	70.722	34.410	105.132	337.320	57	3.305	3.362	340.682
ISLAS BALEARES	_	6.901	2.474	753	3.458	13.586	11.563	4.629	16.192	29.778	207	588	795	30.573
LA RIOJA	_	5.643	1.957	723	1.622	9.945	7.053	3.397	10.450	20.395	373	166	539	20.934
MADRID	342	23.323	15.610	15.874	62.817	117.624	27.914	51.336	79.250	196.874	386	2.625	3.011	200.227
PAIS VASCO	_	80.353	16.135	8.852	213.191	318.531	34.315	66.795	101.110	419.641	7.835	9.122	16.957	436.598
PRINC DE ASTURIAS	_	12.484	4.453	2.066	8.369	27.372	26.152	7.581	33.733	61.105	4.691	2.756	7.447	68.552
REGION DE MURCIA	_	13.023	3.840	4.797	11.487	33.147	17.466	11.254	28.720	61.867	295	833	1.128	62.995
VALENCIANA	_	124.406	15.993	6.780	358.548	505.727	59.751	35.447	95.198	600.925	5.360	6.932	12.292	613.217
TOTAL	342	998.912	184.010	107.607	2.239.109	3.529.638	693.983	556.032	1.250.015	4.779.653	45.940	135.344	181.284	4.961.279

Anexo 1-2.4

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS

(en millones de pesetas)

Comunidades	Previsiones Iniciales	Modificaciones Netas	Previsiones Finales	Derechos Reconocidos	Recaudación	Derechos Reconocidos Pendientes de Ingreso
ANDALUCIA	1.195.199	166.032	1.361.231	1.222.340	1.000.371	221.969
ARAGON	60.476	43.575	104.051	80.046	50.196	29.850
CANARIAS	193.920	64.789	258.709	219.274	165.737	53.537
CANTABRIA	49.829	9.092	58.921	49.385	48.029	1.356
CASTILLA-LA MANCHA	125.595	14.761	140.356	124.518	113.613	10.905
CASTILLA Y LEON	150.404	59.061	209.465	212.119	161.486	50.633
CATALUÑA	987.971	—	987.971	1.093.856	1.069.063	24.793
EXTREMADURA	85.549	29.977	115.526	83.018	60.045	22.973
FORAL DE NAVARRA	124.476	37.856	162.332	188.636		
GALICIA	349.874	—	349.874	334.392	315.074	19.318
ISLAS BALEARES	24.975	17.155	42.130	32.470	23.112	9.358
LA RIOJA	23.357	6 305	29.662	22.658	14.858	7.800
ORID	217.762	28.879	246.641	214.024	118.718	95.306
PAIS VASCO	425.900	21 404	447.304	428.739	401.637	27.102
PRINCIPADO DE ASTURIAS	66.525	7 978	74.503	71.008	52.380	18.628
REGION DE MURCIA	61.927	12 696	74.623	63 407	38.956	24.451
VALENCIANA	557.239	48.211	605 450	603.604	498.535	105.069
TOTAL	4.700.978	567 771	5.268.749	5.043.494	4.131.810	723.048

Anexo I-2.5

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

DERECHOS RECONOCIDOS

(en millones de pesetas)

Comunidades	CAP.1 Imptos. Directos	CAP.2 Imptos Indirec	CAP.3 Tasas y Otros Ingres	CAP.4 Transfs. Ctes	CAP.5 Ingres Patrimo	Total Ope. Ctes.	CAP.6 Enajen Invers. Reales	CAP.7 Transfs. Capital	Total Ope. Capital	TOTAL OPS. NO FINANCS.	CAP.8 Varic. Activos Financ.	CAP.9 Varic. Pasiv. Financ.	TOTAL OPS. FINANCS.	TOTALES
ANDALUCIA	18 316	60 325	37 319	906 591	3218	1 025 769	—	104 330	104 330	1 130 099	848	91.595	92 241	1.222.340
ARAGON	7 412	10 914	10 664	14 332	3681	47 003	248	7 308	7 556	54 559	67	25.420	25 487	80.046
CANARIAS	2 911	56 114	13 736	94 773	3967	171 501	343	21 502	21 845	193 346	608	25.320	25.928	219.274
CANTABRIA	3 428	5 233	3 780	19 555	403	32 399	4	1 147	1 151	33.550	278	15.557	15.835	49.385
CASTILLA LA MANCHA	3 161	10 297	9 141	39 105	2356	64 060	1.575	57 828	59 403	123.463	840	215	1.055	124.518
CASTILLA Y LEON	8 631	16 690	16 085	50 784	4035	96 225	2.812	29 961	32 773	128.998	51.960	31.161	83.121	212.119
CATALUÑA	56 499	103 434	42 684	724 919	1179	928 715	4	45 819	45.823	974.538	68	119.250	119.318	1.093.856
EXTREMADURA	1 898	4 537	6 098	28.424	882	41.839	—	37.734	37.734	79.573	345	3.100	3.445	83.018
FORAL DE NAVARRA	69 385	54 191	7 868	46 324	4206	181.974	2.792	1.758	4 550	186.524	2.112	—	2.112	188.636
GALICIA	7.768	17.031	17.082	219.958	1724	263.563	5	33.787	33.792	297.355	40	36.997	37.037	334.392
ISLAS BALEARES	3.528	13 442	1 890	3.715	269	22.844	—	2.814	2.814	25.658	117	6.695	6.812	32.470
LA RIOJA	1.626	3.130	2.588	6.907	178	14.429	7	1.525	1.532	15.961	29	6.668	6.697	22.658
MADRID	2.331	—	5.037	119.269	1670	128.307	29	23 879	23.908	152.215	827	60.982	61.809	214.024
PAIS VASCO	—	—	6.677	356.611	8153	371.441	212	19.860	20.072	391.513	2.128	35.100	37.226	428.739
PRINCIPADO DE ASTURIAS	3.438	8.043	9.388	19.646	270	40.785	616	9.764	10.380	51.165	4.633	15.210	19.843	71.008
REGION DE MURCIA	2.676	8.897	7.655	16.361	509	36.098	372	9 903	10.275	46.373	696	16.338	17.034	63.407
VALENCIANA	13.562	45.780	34.189	437.061	2507	533.099	38	24.797	24 835	557.934	18	45.652	45.670	603.604
TOTAL	206.570	418.058	231.881	3.104.335	39.207	4.000.051	9.057	433.716	442.773	4.442.824	65.410	535.260	600.670	5.043.494

Anexo I-2.6

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

PRESUPUESTOS CERRADOS: ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(en millones de pesetas)

Comunidades	Saldo Inicial	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Saldo Neto	Pagos	Pendiente de Pago
ANDALUCIA	151.950	50	—	152.000	142.759	9.241
ARAGON	4.519	—	2	4.517	4.450	67
CANARIAS	48.230	146	87	48.289	36.295	11.994
CANTABRIA	1.939	—	94	1.845	1.421	424
CASTILLA-LA MANCHA	40.897	—	310	40.587	30.144	10.443
CASTILLA Y LEON	3.800	—	108	3.692	601	3.091
CATALUÑA	125.168	—	1.597	123.571	114.466	9.105
EXTREMADURA	14.209	1	1.205	13.005	11.638	1.367
FORAL DE NAVARRA	13.740	—	227	13.513	10.620	2.893
GALICIA	32.965	23	1	32.987	29.881	3.106
ISLAS BALEARES	4 407	—	—	4.407	4.407	—
LA RIOJA	—	—	—	—	—	—
MADRID	72.963	—	—	72.963	70.966	1.997
PAIS VASCO	89 697	—	4.043	85.654	71.365	14.289
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2 807	1.254	—	4.061	4.055	6
REGION DE MURCIA	18 838	—	1	18.837	18.168	669
VALENCIANA	11 588	—	34	11.554	7.992	3.562
TOTAL	637 717	1 474	7.709	631.482	559.228	72.254

Anexo I-2.7

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

PRESUPUESTOS CERRADOS: DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS

(en millones de pesetas)

Comunidades	Saldo Inicial	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Saldo Neto	Recaudación	Pendiente de Ingreso
ANDALUCIA	187.777	1.313	1.522	187.568	125.442	62.126
ARAGON	18.218	272	1.515	16.975	4.507	12.468
CANARIAS	58.010	—	977	57.033	28.715	28.318
CANTABRIA	7.073	141	1	7.213	1.531	5.682
CASTILLA-LA MANCHA	24 385	—	422	23.963	16.491	7.472
CASTILLA Y LEON	52 896	7.552	7.800	52.648	28.165	24.483
CATALUÑA	12 778	—	1.712	11.066	2.402	8.664
EXTREMADURA	13 565	—	135	13.430	2.717	10.713
FORAL DE NAVARRA	32 362	10 745	17.628	25 479	—	25.479
GALICIA	18 340	—	469	17.871	11.723	6.148
ISLAS BALEARES	14 027	—	180	13.847	4.580	9.267
LA RIOJA	7 193	1 053	1.305	6.941	1.637	5.304
MADRID	70 023	323	5 844	64.502	31.064	33.438
PAIS VASCO	48 784	—	638	48.146	39.427	8.719
PRINCIPADO DE ASTURIAS	15 970	307	558	15.719	11.007	4.712
REGION DE MURCIA	27 289	—	250	27.039	21.788	5.251
VALENCIANA	100 797	—	5 026	95.771	71.509	24.262
TOTAL	709 487	21 706	45 982	685.211	402.705	282.506

Anexo I-2.8

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS: ACREEDORES

(en millones de pesetas)

Comunidades	Saldo Inicial	Modificaciones	Ingresos	Total	Pagos	Saldo Final
ANDALUCIA	12.086	—	242.178	254.264	194.466	59.798
ARAGON	5.520	—	88.991	94.511	87.637	6.874
CANARIAS	10.013	—	124.907	134.920	126.447	8.473
CANTABRIA	5.559	—	107.945	113.504	107.910	5.594
CASTILLA-LA MANCHA	5 492	—	112.931	118.423	115.343	3.080
CASTILLA Y LEON	8 560	—	84.164	92.724	88.083	4.641
CATALUÑA	30 850	—	433.328	464.178	439.480	24.698
EXTREMADURA	11 317	—	112.911	124.228	84.273	39.955
FORAL DE NAVARRA	252	—	2.816	3.068	2.616	452
GALICIA	9.204	—	243.647	252.851	241.341	11.510
ISLAS BALEARES	1.786	—	40.565	42.351	41.573	778
LA RIOJA	2 651	—	7.610	10.261	6.581	3.680
MADRID	15 670	—	256.236	271.906	198.947	72.959
PAIS VASCO	12 590	(1 449)	565.953	577.094	565.258	11.836
PRINCIPADO DE ASTURIAS	3.261	—	15.690	18.951	15.823	3.128
REGION DE MURCIA	11 015	—	76.955	87.970	75.207	12.763
VALENCIANA	20 410	—	165.712	186.122	104.030	82.092
TOTAL	166 236	(1 449)	2 682.539	2.847.326	2.495.015	352.311

Anexo I-2.9

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS: DEUDORES

(en millones de pesetas)

Comunidades	Saldo Inicial	Modificaciones	Pagos	Total Deudores	Ingresos	Saldo Final
ANDALUCIA	602	—	224	826	307	519
ARAGON	1.160	—	17.249	18.409	16.843	1.566
CANARIAS	(19)	—	1.045	1.026	1.084	(58)
CANTABRIA	365	—	12	377	9	368
CASTILLA-LA MANCHA	203	—	1.475	1.678	1.411	267
CASTILLA Y LEON	2 432	—	44.358	46.790	44.346	2.444
CATALUÑA	83	—	173.641	173.724	173.648	76
EXTREMADURA	5 762	—	57.813	63.575	25.150	38.425
FORAL DE NAVARRA	177	—	9.739	9.916	10.390	(474)
GALICIA	137	—	121	258	188	70
ISLAS BALEARES	1.369	—	16.628	17.997	17.632	365
LA RIOJA	872	—	1.632	2.504	1.389	1.115
MADRID	41 816	—	1 466.735	1.508.551	1.459.643	48.908
PAIS VASCO	586	—	2.210	2.796	1.688	1.108
PRINCIPADO DE ASTURIAS	290	—	618	908	652	256
REGION DE MURCIA	5 374	—	63.674	69.048	68.654	394
VALENCIANA	—	—	—	—	—	—
TOTAL	61.209	—	1 857.174	1.918.383	1.823.034	95.349

II. CORPORACIONES LOCALES

ANEXO II.1

Relación de corporaciones con población inferior a 5.000 habitantes que no han rendido cuentas al Tribunal de Cuentas

Andalucía

Almería:

Abrucena, Alboloduy, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Alhabia, Alicún, Alsoduz, Bédar, Benitagla, Benizalón, Chirivel, Darrícal, Enix, Felix, Fondón, Gallardos (Los), Garrucha, Huéciga, Laujar de Andarax, Lubrín, Lúcar, Mojácar, Nacimiento, Olula de Catro, Purchena, Santa Cruz, Suflí, Thal, Tres Villas (Las) y Uleila del Campo.

Cádiz:

Algar, Benaocaz, Bosque (El), Castellar de la Frontera, Espera, Gastor (El), Paterna de Rivera, Setenil, Torre-Alháquime y Zahara.

Córdoba:

Almedinilla, Añora, Blázquez, Cardeña, Dos Torres, Encinas Reales, Fuente la Lancha, Luque, Montalbán de Córdoba, Monturque, Obejo y Villanueva del Rey.

Granada:

Albuñán, Albuñuelas, Alhendín, Alquife, Benalúa de Guadix, Benalúa de las Villas, Bérchules, Cacín, Calicasas, Capileira, Carataunas, Cástaras, Cogollos de Guadix, Cúllar-Vega, Deifontes, Dúdar, Escúzar, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, Huétor-Santillán, Itrabo, Jerez del Marquesado, Lantéira, Lecrín, Lobras, Morelábor, Nevada, Pampaneira, Polícar, Purullena, Quéntar, Santa Cruz del Comercio, Soportújar, Torre-Cardela, Válor, Valle (El), Ventas de Huelva y Víznar.

Huelva:

Almonaster la Real, Aroche, Arroyomolinos de León, Berrocal, Cabezas Rubias, Cala, Campofrío, Cañaveral de

León, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Escacena del Campo, Fuenteheridos, Granada de Riotinto (La), Higuera de la Sierra, Hinojales, Linares de la Sierra, Lucena del Puerto, Marines (Los), Paymogo, Puebla de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Ana la Real, Santa Olalla de Cala, Valdelarco y Villanueva de las Cruces.

Jaén:

Aldeaquemada, Arjonilla, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Castellar, Chiclana de Segura, Frailes, Fuerte del Rey, Guardia de Jaén (La), Guarromán, Hinojares, Hornos, Huesa, Jabalquinto, Noalejo, Orcera, Puente de Génave, Segura de la Sierra, Torres de Albanchez y Villarrodrigo.

Málaga:

Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almargen, Almogía, Alozaina, Archez, Arenas, Benadalid, Benalauría, Benamargosa, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Canillas de Aceituno, Canilla de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cuevas Bajas, Cútar, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Jimena de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Moclinejo, Mollina, Montejaque, Parauta, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Valle de Abdalajís, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario y Zufre.

Sevilla:

Albaida de Aljarafe, Algámitas, Almadén de la Plata, Almensilla, Benacazón, Burguillos, Cañada del Rosal, Carrión de los Céspedes, Espartinas, Lantejuela (La), Palomares del Río, Peñaflor, Pruna, Real de la Jara (El), Ronquillo (El), Saucejo (El), Umbrete, Villanueva de San Juan.

Aragón

Huesca:

Abizanda, Agüero, Albero Bajo, Alcalá del Obispo, Antillon, Aragües del Puerto, Argavieso, Arguis, Azanuy-Alins, Barcabo, Berbegal, Bierge, Biscarrues, Bonansa, Borau, Broto, Candasnos, Canfranc, Castiello de Jaca, Colungo, Chalamera, Estada, Fago, Fanlo, Fonz, Foradada de Toscar, Hoz y Costean, Igries, Ilche, Isabena, Jasa, Labuerda, Laluenga, Lanaja, Laperdiguera, Laspuña, Montanuy, Palo, Panticosa, Peralta de Calasanz, Puente de Montañana, Puértolas, Pueyo de Araguas, Robres, Salillas, San Esteban de Litera, Sangarren, Santa María de Dulcis, Senes de Alcubierre, Sesa, Sopeira, Tardienta, Torre la Ribera, Valle de Bardagi, Valle de Hecho, Valle de Lierp, Veracruz, Viacamp y Litera, Vicien y Villanúa.

Zaragoza:

Abanto, Acered, Agón, Aguarón, Alconchel de Ariza, Aldehuela de Liestos, Alpartir, Ambel, Anento, Añón de Moncayo, Aranda de Moncayo, Artieda, Asín, Atea, Balconchán, Berdejo, Biel-Fuencalderas, Bijuesca, Bisimbre, Bordalba, Borja, Bulbuente, Cabolafuente, Calatorao, Carenas, Cariñena, Castejón de las Armas, Castiliscar, Cimballa, Codo, Contamina, Cosuenda, Cubel, Chiprana, Chodes, Fabara, Fayos (Los), Frasno, (El) Frescano, Fuendejalón, Fuedetodos, Fuentes de Jiloca, Godojos, Gotor, Ibdes, Jarque, Lagata, Langa del Castillo, Letux, Luesma, Luna, Maella, Maleján, Maluenda, Mesones de Isuela, Mianos, Miedes de Aragón, Monegrillo, Moneva, Monreal de Ariza, Morata de Jiloca, Muela (La), Munebrega, Nigüella, Olves, Orcajo, Orera, Ores, Paracuellos de Jiloca, Plenas, Pozuel de Ariza, Pozuelo de Aragón, Puebla de Albortón, Romanos, Rueda de Jalón, Ruesca, Sabiñán, Salvatierra de Esca, San Mateo de Gállego, Sisamón, Terrer, Torralba de los Frailes, Torralbilla, Torrehermosa, Torrelapaja, Torrellas, Torrijo de la Cañada, Trasobares, Uncastillo, Urrea de Jalón, Used, Valtorres, Velilla de Jiloca, Vilueña (La), Villanueva de Gállego, Villar de los Navarros.

Teruel:

Ababuj, Abejuela, Aguatón, Aguilar del Alfambra, Alacón, Albentosa, Alcaine, Aliaga, Allepuz, Alloza, Allueva, Arcos de las Salinas, Argente, Bádenas, Barrachina, Bea, Beceite, Blesa, Bordón, Bronchales, Calaceite, Calomarde, Camañas, Cañada de Benatanduz, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, Castelnou, Cerollera (La), Cretas, Crivillén, Cubla, Cuevas de Almudén, Escucha, Estercuel, Ferreruela de Huerva, Fonfría, Fortanete, Fuentes de Rubielos, Galve, Gargallo, Griegos, Hinojosa de Jarque, Huesa del Común, Jarque de la Val, Jatiel, Jorcas, Lanzuela, Libros, Linares de Mora, Lledo, Martín del Río, Mata de los Olmos (La), Miravete de la Sierra, Monroyo, Montalbán, Mosqueruela, Noguera, Nogueras, Ojos Negros, Olba, Oliete, Olmos (Los), Palomar de Arroyos, Peñarroya de Tastavíns, Perales del Alfambra, Plou, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, Samper de Calanda, San Agustín, Santa Cruz de Nogueras, Terriente, Toril y Masegoso, Torralba de los Sisones, Torre de las Arcas, Torre los Negros, Torrelacárcel, Torrijas, Torrijo del Campo, Tramacastiel, Valbona, Valdealgorfa, Villahermosa del Campo, Villar del Cobo y Villar del Salz.

Asturias

Allande, Cabrales, Morcín, Onís, Peñamellera Alta, Regueras (Las), Ribadedeva, San Tirso de Abres, Taramundi y Villanueva de Oscos.

Baleares

Algaida, Bañalbufar, Estellenchs, Fornalutx, Montuiri, Petra, Sant Lluis, Villafranca de Bonany y Migjorn Gran (Es).

Canarias

Santa Cruz de Tenerife:

Aguló y Alajeró.

Cantabria

Cabezón de Liébana, Cillórigo-Castro, Marina de Cudeyo, Noja, Pesaguero, Rozas (Las), San Pedro del Romeral, Tojos (Los), Tresviso, Udías, Valdeprado del Río y Villaverde de Trucíos.

Castilla y León

Avila:

Albornos, Aldeanueva de Santa Cruz, Aldehuela (La), Avellaneda, Becedas, Blascosancho, Bohodón (El), Brabos, Burgohondo, Cabezas del Villar, Cardeñosa, Carrera (La), Casavieja, Cillán, Cuevas del Valle, Chamartín, Flores de Avila, Fuentes de Año, Gimialcón, Grandes y San Martín, Guisando, Herreros de Suso, Hornillo (El), Hoyo de Pinares (El), Hoyocasero, Hoyos de Miguel Muñoz, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Lanzahita, Mijares, Muñana, Muñogrande, Muñomer del Peco, Muñosancho, Narrillos del Rebollar, Narros de Saldueña, Nava del Barco, Navalacruz, Navalmoral, Navalonguilla, Navalosa, Navalperal de Pinares, Navaluenga, Navaquesera, Navarredonda de Gredos, Navarredondilla, Navas del Marqués (Las), Navatalgordo, Navatejares, Pajares de Adaja, Palacios de Goda, Parral (El), Peñalba de Avila,

Piedrahíta, Poyales del Hoyo, Pozanco, Pradosegar, Rasueros, Salvadiós, San Esteban de los Patos, San Juan del Molinillo, San Juan de Olmo, San Lorenzo de Tormes, San Martín del Pimpollar, Sanchorreja, Santa María de los Caballeros, Santa María del Cubillo, Santo Tomé de Zabarcos, Serrada (La), Serranillos, Sigeres, Tiñosillos, Tolbaños, Tormellas, Torre (La), Vadillo de la Sierra, Vega de Santa María, Velayos, Villaflor, Villanueva de Avila, Villanueva de Gómez, Villanueva del Campillo, Villatoro, Viñegra de Moraña y Vita.

Burgos:

Albillos, Anguix, Arandilla, Arauzo de Miel, Arenillas de Riopisuerga, Arija, Atapuerca, Ausines (Los), Barbadillo de Herreros, Barbadillo del Mercado, Barrios de Colina, Basconcillos del Tozo, Busto de Bureba, Cabañes de Esgueva, Cabia, Caleruega, Campolara Carcedo de Bureba, Cardeñadijo, Cascajares de Bureba, Cascajares de la Sierra, Castrojeriz, Cayuela, Ciadoncha, Cillaperlata Cilleruelo de Abajo, Contreras, Cubillo del Campo, Cuevas de San Clemente, Espinosa de Cervera, Espinosa de los Monteros, Fontioso, Fresno de Riotirón, Fresno de Rodilla, Frías, Gallega (La), Grijalba, Gumiel de Hizán, Gumiel de Mercado, Hornillos del Camino, Horra (La), Hortigüela, Huerta de Arriba, Iglesias, Jaramillo de la Fuente, Jaramillo Quemado, Jurisdicción de Lara, Mambrillas de Lara, Mamolar, Manciles, Merindad de Cuesta-Urría, Merindad de Río Ubierna, Miraveche, Monasterio de la Sierra, Monterrubio de Demanda, Navas de Bureba, Neila, Olmedillo de Roa, Padilla de Abajo, Palacios de Riopisuerga, Palazuelos de la Sierra, Partido de la Sierra en Tobalina, Pedrosa del Páramo, Peñaranda de Duero, Peral de Arlanza, Pineda de la Sierra, Pinilla de los Moros, Pradoluengo, Presencio, Puentedura, Quintana del Pidio, Quintanaelez, Quintanaortuño, Quintanapalla, Quintanar de la Sierra, Quintanilla de la Mata, Quintanilla del Coco, Quintanilla-Vivar, Regumiel de la Sierra, Retuerta, Revilla del Campo, Revilla-Vallegera, Riocavado de la Sierra, Rubena, Rublacedo de Abajo, Santa María-Ribarredonda, Santibáñez de Esgueva, Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Sasamón, Sordillos, Sotillo de la Ribera, Sotragero, Susinos del Páramo, Tamarón, Tinieblas, Tobar, Torrelara, Valmala, Valle de Sedano, Valle de Valdelaguna, Valle de Zamanzas, Valles de Palenzuela, Vid de Bureba (La), Viloria de Rioja, Vilvestre del Pinar, Villaespasa, Villafruela, Villagonzalo-Pedernales, Villalba de Duero, Villaldemiro, Villamayor de Treviño, Villaquirán de los Infantes, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Villasandino, Villatuelda, Villegas, Villoruebo y Zarzosa de Riopisuerga.

León:

Benavides, Benuza, Boca de Huérgano, Brazuelo, Cabañas Raras, Cabreros del Río, Cacabelos, Campazas, Campo de Villavidel, Candín, Corullón, Cubillas de los Oteros, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Gradefes, Hospital de Orgigo, Joarilla de las Matas, Mansilla de las Mulas, Molinaseca, Oencia, Omañas (Las), Onzonilla, Pedrosa del Rey, Peranzanes, Priaranza del Bierzo, Prioro, Puebla del Lillo, Puente de Domingo Flórez, Quintana y Congosto, Reyero, Sagahún, San Millán de los Caballeros, San Pedro Bercianos, Santiago Millas, Santovenia de la Valdoncina, Sena de Luna, Sobrado, Soto de la Vega, Urdiales del Páramo, Valdefuentes del Páramo, Valderas, Villadecanes, Villademor de la Vega, Villamoratiel de las Matas, Villaornate y Castro, Villarejo de Orbigo y Villaturiel.

Palencia:

Abia de las Torres, Antigüedad, Autillo de Campos, Bárcena de Campos, Becerril de Campos, Boada de Campos, Bustillo del Páramo de Carrión, Capillas, Castrillo de Villavega, Cervera de Pisuerga, Cevico de la Torre, Cevico Navero, Cobos del Cerrato, Cordovilla la Real, Espinosa del Cerrato, Espinosa de Villagonzalo, Guaza de Campos, Hérmedes de Cerrato, Lagartos, Lantadilla, Ledigos, Lomas, Magaz, Mazariegos, Mazuecos de Valdeginate, Meneses de Campos, Micieces de Ojeda, Moratinos, Muda, Olmos de Ojeda, Palenzuela, Paredes de Nava, Payo de Ojeda, Población de Arroyo, Pomar de Valdivia, San Cebrián de Muda, San Mamés de Campos, Valbuena de Pisuerga, Valde-Ucieza, Villaconancio, Villaherreros, Villalaco, Villameriel, Villarrabe y Villoldo.

Salamanca:

Alameda de Gardón (La), Alaraz, Alba de Tormes, Aldea del Obispo, Aldealengua, Aldeaseca de Alba, Aldehuela de la Bóveda, Almenara de Tormes, Anaya de Alba, Barceo, Cabeza de Béjar (La), Caberizos, Calzada de Béjar (La), Cantagallo, Casillas de Flores, Cerezal de Peñahorcada, Cerralbo, Coca de Alba, Ejeme, Encinasola de los Comendadores, Florida de Liébana, Fregeneda (La), Fresnedoso, Fuentes de Oñoro, Galisancho, Gallegos de Solmirón, Garcihernández, Garcirrey, Herguijuela de Ciudad-Rodrigo, Herguijuela del Campo, Horcajo de Montemayor, Hoya (La), Juzbado, Larrodrigo, Macotera Martinamor, Membribe, Mieza, Milano, Monsagro, Morasverdes, Moronta, Navacarros, Navamorales, Negrilla de Palencia, Orbada (La), Pajares de la Laguna, Palencia de Negrilla, Parada de Arriba, Pedrosillo de Alba, Pelayos, Peñarandilla, Pereña, Pinedas, Pino de Tormes (El), Puente de Congosto, Puerto de Béjar, Saldeana, San Cristóbal de la Cuesta, San Felices de los Gallegos, San Pedro del Valle, San Pelayo de Guareña, Sanchón de la Ribera, Sando, Santa María de Sando, Santos (Los), Serradilla del Arroyo, Sierpe (La), Sorihuela, Tala (La), Tarazona de Guareña, Tejado (El), Tenebrón, Terradillos, Tornadizo (El), Valdecarros, Valdehijaderos, Valdelageve, Valdemierque, Valderrodrigo, Valsalabroso, Valverdón, Vallejera de Riofrío, Vega de Tirados, Velles (La), Ventosa del Río Almar, Vilvestre, Villar de la Yegua, Villar de Samaniego, Villares de la Reina, Villasbuenas, Villasdardo, Villaseco de los Reyes, Villavieja de Yeltes, Zarapicos y Zarza de Pumareda (La).

Segovia:

Alconada de Maderuelo, Aldealcorvo, Aldealengua de Pedraza, Aldeanueva de la Serrezuela, Aldehorno, Aldeonte, Anaya, Añe, Armuña, Barbolla, Basardilla, Bercimuel, Boceguillas, Brieva, Cabezuela, Calabazas, Campo de San Pedro, Casla, Castro de Fuentidueña, Castrojimeno, Castroserracín, Cedillo de la Torre, Cilleruelo de San Mamés, Collado Hermoso, Condado de Castilnovo, Cuevas de Provanco, Fresno de Cantespino, Fresno de la Fuente, Frumales, Fuente de Santa Cruz, Fuenterrebollo, Fuentidueña, Garcillán, Grajera, Honrrubia de la Cuesta, Hontalbilla, Ituero y Lama, Juarros de Voltoya, Marazoleja, Melque de Cercos, Navalilla, Navares de Ayuso, Navares de Enmedio, Navares de las Cuevas, Nieva, Otero de Herreros, Pajarejos, Palazuelos de Eresma, Pelayos del Arroyo, Perosillo, Pinarnegrillo, Pradales, Riaguas de San Bartolomé, Riaza, Roda de Eresma, San Pedro de Gaillos, Sangarcía, Santo Domingo de Pirón, Sebulcor, Sotosalbos, Torrecaballeros, Trescasas, Urueñas, Valle de Tabladillo y Villacastín.

Soria:

Almenar de Soria, Arenillas, Arévalo de la Sierra, Barcones, Borjabad, Borobia, Buitrago, Caltojar, Cañamaque, Carabantes, Caracena, Carrascosa de Abajo, Casarejos, Ciruela, Ciria, Cubilla, Cueva de Agreda, Deza, Escobosa de Almazán, Fresno de Caracena, Fuentecantos, Fuentelmonge, Fuentelsaz de Soria, Herrera de Soria, Medinaceli, Muriel de la Fuente, Muriel Viejo, Nafría de Ucero,

Nolay, Portillo de Soria, Poveda de Soria (La), Quiñonería (La), Rebollar, Rello, Reznos, Riba de Escalote (La), Rollamienta, Santa María de Huerta, Santa María de las Hoyas, Soliedra, Talveila, Torlengua, Torrubia de Soria, Ucero, Valdeavellano de Tera, Villanueva de Gormaz, Villar del Ala y Villares de Soria (Los).

Valladolid:

Aguasal, Aguilar de Campos, Almenara de Adaja, Berrueces, Bobadilla del Campo, Bocigas, Brahojos de Medina, Cabezón de Valderaduey, Campillo (El), Canalejas de Peñafiel, Castrillo de Duero, Castrobol, Castromembibre, Castronuevo de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Ceinos, Cogeces de Iscar, Cogeces del Monte, Cubillas de Santa Marta, Cuenca de Campos, Fompedraza, Fuente-Olmedo, Gatón de Campos, Geria, Llano de Olmedo, Megeces, Melgar de Abajo, Monasterio de Vega, Montealegre, Moral de la Reina, Moraleja de las Panaderas, Mucientes, Olivares de Duero, Olmos de Esgueva, Olmos de Peñafiel, Palazuelo de Vedija, Parrilla (La), Pedraja de Portillo (La), Puras, Quintanilla de Onésimo, Quintanilla de Trigueros, Quintanilla del Molar, Renedo, Roales, Rueda, Saélices de Mayorga, San Miguel del Arroyo, Santibáñez de Valcorba, Sardón de Duero, Seca (La), Simancas, Tiedra, Tordehumos, Traspinedo, Trigueros del Valle, Urueña, Valdestillas, Valoria la Buena, Vega de Ruiponce, Velascálvaro, Velliza, Viloria, Villafrandes de Campos, Villafrechos, Villafuerte, Villagómez la Nueva, Villalán de Campos, Villalba de los Alcores, Villalón de Campos, Villanueva de los Infantes, Villardefrades, Villarmentero de Esgueva, Villavellid y Zaratán.

Zamora:

Abezames, Alcañices, Algodre, Arcenillas, Arcos de la Polvorosa, Asturianos, Bretocino, Burganes de Valverde, Bustillo del Oro, Casaseca de Campeán, Castrillo de la Guareña, Cernadilla, Faramontanos de Tabara, Figueruela de Arriba, Fonfría, Fuentelapeña, Fuentesecas, Gallegos del Pan, Gallegos del Río, Guarrate, Hiniesta (La), Maderal (El), Madridanos, Mahide, Manganeses de la Lampreana, Manganeses de la Polvorosa, Manzanal de Arriba, Manzanal de los Infantes, Mayalde, Milles de la Polvorosa, Mombuey, Montamarta, Morales de Toro, Morales del Vino, Mùga de Sayago, Peñausende, Peque, Pereruela, Pobladura del Valle, Porto, Pozoantiguo, Quintanilla del Monte, Quintanilla del Olmo, Revellinos, Rionegro del Puente, Roales, Robleda-Cervantes, San Agustín del Pozo, San Justo, Tábara, Torre del Valle (La), Trabazos, Trefacio, Uña de Quintana, Vadillo de la Guareña, Vega de Villalobos, Vegalatrave, Vidayanes, Villabrázaro, Villageriz, Villalazán, Villalobos, Villalonso, Villalube, Villamor de los Escuderos, Villanazar, Villardondiego, Villavendimio y Viñas.

Castilla—La Mancha

Albacete:

Alcalá de Júcar, Alcaraz, Alpera, Ballestero, Barrax, Bienservida, Bogarra, Bonillo (El), Carcelén, Casas de Lázaro, Cotillas, Elche de la Sierra, Ferez, Fuensanta, Gineta (La), Liétor, Masegoso, Molinicos, Montalvos, Motilleja, Munera, Navas de Jorquera, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Povedilla, Robledo, Vianos, Villatoya, Villaverde de Guadalimar y Viveros.

Ciudad Real:

Abenojar, Albadalejo, Almedina, Arenas de San Juan, Castelar de Santiago, Mestanza, Pozuelos de Calatrava (Los), Puerto Lápice, Ruidera, Santa Cruz de Mudela, Torralba de Calatrava, Torre de Juan Abad y Villanueva de la Fuente.

Cuenca:

Abia de la Obispalía, Alarcón, Alcalá de la Vega, Alcohujate, Algarra, Altarejos, Arcas del Villar, Arcos de la Sierra, Arguisuelas, Barchín del Hoyo, Belinchón, Boniches, Campillo de Altobuey, Campillos-Paravientos, Cañavate (El), Carrascosa, Casas de Garcimolina, Castillejo de Iniesta, Castillejo-Sierra, Enguidanos, Fresneda de la Sierra, Granja de Campalbo, Granja de Iniesta, Hinojosa (La), Hinojosos (Los), Honrubia, Hontanaya, Huélamo, Huerta de la Obispalía, Laguna del Marquesado, Lagunaseca, Mariana, Masegosa, Mesas (Las), Minglanilla, Mira, Monreal del Llano, Montalbanejo, Montalbo, Moya, Narboneta, Osa de la Vega, Pedernoso (El), Picazo (El), Piqueras del Castillo, Pozorrubielos de la Mancha, Priego, Provencio (El), Salmeroncillos, Salvacañete, San Martín de Boniches, Santa María del Val, Talayuelas, Tébar, Tribaldos, Uña, Vara del Rey, Villagarcía del Llano, Villagorda del Marquesado, Villar de Cañas, Villar de la Encina, Villares del Saz, Zafra de Záncara, Zarza del Tajo y Zarzuela.

Guadalajara:

Ablanque, Adobes, Alcocer, Alcoroches, Algar de Mesa, Almonacid de Zorita, Angón, Anquella del Pedregal, Armuña de Tajuña, Baides, Baños de Tajo, Barriopedro, Brihuega, Bujalaro, Campillo de Dueñas, Canredondo, Cendejas de la Torre, Ciruelas, Cobeta, Cogollor, Driebes, Esplegares, Fuence millán, Fuentelviejo, Fuentenovilla, Gajanejos, Henche, Heras, Huermeces del Cerro, Illana, Inviernas (Las), Jadraque, Mantiel, Masegoso de Tajuña, Mazuecos, Megina, Mochales, Mondéjar, Montarrón, Moratilla de Meleros, Negredo, Olmeda de Cobeta, Olmeda de Jadraque, Paredes de Sigüenza, Peñalén, Peralejos de las Truchas, Pinilla de Molina, Piqueras, Pobo de Dueñas (El), Poveda de la Sierra, Pozo de Almoguera, Prados Redondos, Renera, Riba de Saélices, Sacecorbo, Saélices de la Sal, Sayatón, Sotillo (El), Taravilla, Terzaga, Tierzo, Torrecuadrada de Molina, Torrecuadradilla, Tórtola de Henares, Traid, Valdarachas, Valdelcubo, Valderrebollo, Valhermoso, Villanueva de Argecilla, Villel de Mesa y Yélamos de Arriba.

Toledo:

Alameda de la Sagra, Albarreal de Tajo, Almendral de la Cañada, Almonacid de Zorita, Almorox, Arcicollar, Brihuega, Burujón, Cabezamesa de Camuñas, Carmena, Carranque, Cobeja, Erustes, Garciotúa, Herreruela de Oropesa, Hinojosa de San Vicente, Hontanar, Iglesuela (La), Illán de Vacas, Jadraque, Lagartera, Lillo, Magán, Malpica de Tajo, Mata (La), Mesegar, Montearagón, Navalcán, Noblejas, Oropesa, Parrillas, Puerto de San Vicente, Real de San Vicente (El), Santo Domingo-Caudilla, Sartajada, Seseña, Torralba de Oropesa, Torre de Esteban Hambrán (La), Totanes, Valmojado, Velada, Ventas de San Julián (Las), Ventas de Retamosa, Villamiel de Toledo, Yeles y Yepes.

Cataluña

Barcelona:

Aiguafreda, Alpens, Ametlla del Vallés (L'), Argençola, Avinyó, Balenyá, Bellprat, Bigues i Riells, Borredà, Brull (El), Cabanyes (Les), Cabrera d'Igualada, Calaf, Cànoves i Samelús, Canyelles, Capellades, Capolat, Carme, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Castellfollit de Riubregós, Castellfollit del Boix, Castellolí, Castellterçol, Castellví de Rosanes, Castellví de la Marca, Collbató, Collsuspina, Copons, Dosrius, Espunyola (L'), Estany (L'), Fígols, Fogars de Montclús, Gelida, Gualba, Hostalets de Pierola (Els), Lluçà, Marganell, Martorelles, Masies de Roda (Les), Masies de Voltregà (Les), Mediona,

Monistrol de Monserrat, Montclar, Montesquiu, Montgat, Montmajor, Montmaneu, Montmany-Figaró, Navarcles, Nou de Berguedà (La), Olesa de Bonesvalls, Olvan, Orpí, Orrius, Pacs del Penedès, Perafita, Pla del Penedès (El), Pobla de Lillet (La), Pont de Vilomara i Rocafor (El), Prats de Rei (Els), Puigdàlber, Pujalt, Quar (La), Roca del Valles (La), Roda de Ter, Rubió, Rupit y Pruit, Saldes, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Lluçanès, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fruitós de Bages, Sant Jaume de Fron anyà, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí D'Albars, Sant Pere de Sallavinera, San Pere de Vilamajor, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç dels Horts, Santa Cecilia de Voltregà, Santa Eugenia de Berga, Santa Eulalia de Ronçana, Santa Fe del Penedès, Santa Margrida i els Monjos, Santa María de Besora, Santa María de Corcó, Santa María de Miralles, Santa María de Palautordera, Seva, Sobremunt, Sora, Torelló, Torre de Claramunt (La), Torrelavit, Torrelles de Llobregat, Vacarisses, Valbona d'Anoia, Valcebre, Veciana, Vilada, Viladecavalls y Viver y Serrateix.

Gerona:

Aiguaviva, Albanyá, Alp, Amer, Argelaguer, Begur, Besalú, Boadella d'Ampordà, Bolvir, Borrassà, Cabanelles, Cabanes, Cadaqués, Camós, Campelles, Canet d'Adri, Cantallops, Capmany, Celrá, Cerviá de Ter, Corçà, Crespià, Cruïlles, Monells i San Sadurní de l'Heura, Escala (L'), Esponellá, Figueres, Fontanals de Cerdenya, Garrigàs, Garrigoles, Garriguella, Lladó, Llambilles, Llanars, Llançà, Llosses (Les), Maçanet de la Selva, Madremanya, Masarac, Mollet de Peralada, Molló, Ogassa, Osor, Palau de Santa Eulàlia, Palau-Satos, Pals, Planes d'Hosteles (Les), Pont de Molins, Pontós, Port de la Selva (El), Queralbs, Regencós, Ribes de Freser, Riudarenes, Riumors, Roses, Sales de Llierca, Sant Climent Sescebes, Sant Joan de Mollet, Sant Joan les Fonts, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Llorenç de la Muga, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Sant Miquel de Fluvià, Santa Llogaia d'Alguema, Selva de Mar (La), Setcases, Siurana, Tortellá, Torrent, Toses, Tossa de Mar, Ullastret, Vall de Bianya (La), Vallfogona de Ripollès, Vall-Llobrega, Ventalló, Verges, Vilablareix, Vilademuls, Vilallonga de Ter, Vilamacolum, Vilamalla, Vilanant, Vila-Sacra, Vilobí d'Onyar y Vilopriu.

Lérida:

Albatàrrec, Albi (L'), Alcanó, Algerri, Alins, Almenar, Alpicat, Arbeca, Arsèguel, Aspa, Baix Pallars, Balaguer, Baronia de Rialb (L'), Barruera, Bausen, Bellaguarda, Bellvís, Benavent de Segrià, Bonastre, Bordes (Es), Bossòst, Cabanabona, Canejan, Castell de Mur, Castellnou de Seana, Castelló de Farfanya, Cava, Coma i la Pedra (La), Estamariu, Estaràs, Farrera, Fígols i Alinyà, Fondarella, Foradada, Fuliola (La), Gimenells i el Pla de la Font, Gósol, Granyanella, Guimerà, Ivars de Noguera, Ivars d'Urgell, Ivorra, Juneda, Linyola, Lles, Llimiana, Massoteres, Montellà i Martinet, Montoliu de Segarra, Oliana, Oliola, Oluges (Les), Poal (El), Pobla de Segur (La), Prats i Sansor, Rialp, Ribera d'Ondara, Salàs de Pallars, Sanaüja, Sant Esteve de la Sarga, Sant Guim de la Plana, Sant Martí de Riucorb, Sant Ramón, Sentiu de Sió (La), Seròs, Seu d'Urgell (La), Soriguera, Tlavera, Tarroja de Segarra, Térmens, Tírvia, Tiurana, Torà, Torreflor, Torrelameu, Valls de Valira (Les), Vilamós, Vilanova de l'Aguda y Vila-Sana.

Tarragona:

Albiol (L'), Alfara de Carles, Arboç (L'), Argentera (L'), Arnes, Banyeres del Penedès, Benifallet, Bisbal de Falset (La), Bisbal del Penedés (La), Borges del Camp (Les), Botarell, Cabacés, Colldejou, Conesa, Duesaigües, Figuera (La), Forès, García, Garidells (Els), Llorenç del Penedès, Marçà, Margalef, Masdenverge, Maspujols, Milà (El), Montmell (El), Móra d'Ebre, Mora la Nova, Morera de Montsant (La), Nou de Gaià, Palma d'Ebre (La), Passanant, Paüls, Pobla de Mafumet (La), Poboleda, Pont d'Armentera, Porrera, Rasquera, Riudecols, Rocafort de Queralt, Rourell (El), Salomó, Salou, Santa Perpètua de Gaià, Sarral, Savallà del Comtat, Secuita (La), Solivella, Tivenys, Torre de Fontaubella (La), Ulldemolins, Vallmoll, Vespella, Vilaplana, Vilella Alta (La), Vilella Baixa (La) y Vimbodí.

Extremadura

Badajoz:

Aljucén, Calzadilla de los Barros, Capilla, Carrascalejo (El), Codosera (La), Cristina, Don Alvaro, Esparragosa de la Serena, Esparragosa de Lares, Garlitos Lapa (La), Manchita, Medellín, Mengabril, Morera (La), Orellana de la Sierra, Parra (La), Puebla de Sancho Pérez, Rena, Risco, Santa Amalia, Tamurejo, Villar del Rey, Villarta de los Montes.

Cáceres:

Abertura, Aliseda, Arroyomolinos, Berzocana, Cabañas del Castillo, Cabezabellosa, Cabrero, Cachorrilla, Cadalso, Campillo de Deleitosa, Cañamero, Casares de las Hurdes, Casatejada, Cilleros, Collado, Cuacos de Yuste, Gargantilla, Gata, Guadalupe, Guijo de Galisteo, Herguijuela, Herreruela, Hoyos, Ladrillar, Madrigal de la Vera, Madroñera, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia, Mata de Alcántara, Navezuelas, Pescueza, Piedras Albas, Pinofranqueado, Portaje, Robledillo de la Vera, Robledillo de Trujillo, Salorino, Santa Cruz de la Sierra, Segura de Toro, Talaveruela de la Vera, Toril, Torre de Don Miguel, Torremenga, Torrequemada, Valdastillas, Valdecañas de Tajo, Valdefuentes, Viandar de la Vera, Villa del Rey, Villamesías, Villamiel, Villasbuenas de Gata y Zarza de Montánchez.

Galicia

La Coruña:

Curtis, Oroso y San Sadurniño.

Lugo:

Barreiros, Corgo (O), Lourenzá, Paradela, Páramo Poboa de Brollon y Triacastela.

Orense:

Barbadás, Cartelle, Merca (A), Porqueira, Teixeira (A), y Toén.

Pontevedra:

Campo Lameiro.

La Rioja

Ajamil, Anguciana, Arnedillo, Arrubal, Autol, Azofra, Bañares, Berceo, Bergasillas Bajera, Bobadilla, Brieva de Cameros, Canales de la Sierra, Casalarreina, Cellórigo, Cidamon, Cihuri, Cornago, Corporales, Cuzcurrita-Río Tirón, Estollo, Foncea, Fonzaleche, Galbarruli, Gravalos, Herramelluri, Hervias, Hornillos de Cameros, Lardero, Leza de Río Leza, Mansilla, Manzanares de Rioja, Murillo de Río Leza, Muro de Aguas, Nalda, Navajún, Nieva de Cameros, Ochanduri, Ojacastro, Pazuengos, Pradillo, Prejano, Rabanera, Redal (El), Rodezno, Sajazarra, San Millán de la Cogolla, Santa Coloma, San Torcuato, Santurde, Santurdejo, Sorzano, Tirgo, Tormantos, Torre en Cameros, Torremontalbo, Uruñuela, Valdemadera, Ventrosa, Villalba de Rioja, Villalobar de Rioja, Villanueva de Cameros, Villar de Torre, Villarejo, Villavelayo,Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba y Zarzosa.

Madrid

Acebeda (La), Alpedrete, Ambite, Atazar (El), Berrueco (El), Braojos, Brunete, Buitrago del Lozoya, Canencia, Carabaña, Cubas, Estremera, Fuente el Saz de Jarama, Garganta de los Montes, Loeches, Lozoya, Madarcos, Miraflores de la Sierra, Navalafuente, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Pezuela de las Torres, Piñuécar, Puentes Viejas, Rascafría, Robledo de Chavela, Robregordo, Somosierra, Torrejón de la Calzada, Torrelaguna, Valdemanco y Valdemaqueda.

Murcia

Pliego.

Navarra

Abaurrea Alta, Aranarache, Aranguren, Araquil, Arive, Artajona, Artazu, Atez, Ayegui, Biurrun-Olcoz, Carcar, Fontellas, Garayoa, Garralda, Guirguillano, Irañeta, Iza, Javier, Lapoblación, Larraona, Legarda, Leoz, Lumbier, Marañón, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo el Fruto, Ochagavía, Olazagutía, Romanzado, Urraúl Alto, Urraúl Bajo, Urroz de Santesteban, Uterga, Uztarroz, Valcarlos y Villanueva.

Valencia

Alicante:

Agres, Aigües de Busot, Albatera, Alcalalí, Alfafara, Balones, Bañeres, Benasau, Beniardá, Benifallim, Benifato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimasot, Confrides, Daya Vieja, Gorga, Llíber, Millena, San Miguel de Salinas y Tárbena.

Castellón:

Benafigos, Castell de Cabres, Chóvar, Eslida,Tirig y Torás.

Valencia:

Barx, Beneixida, Benicolet, Benifairó de la Valldina, Benisanó, Bugarra, Carrícola, Casas Altas, Casas Bajas, Casinos, Castielfabib, Catadau, Domeño, Favara, Gavarda, Guardamar, Loriguilla, Losa del Obispo, Llombai, Macastre, Miramar, Náquera, Piles, Pinet, Pobla del Duc (La), Puebla de San Miguel, Quesa, Rótova, Sinarcas, Sot de Chera, Torre Baja, Vallanca, Vallés y Xeresa.

País Vasco

Vizcaya:

Ubidea.

ANEXO II.3.1.
1990

RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 1990, REQUERIDOS A LAS CORPORACIONES LOCALES INDICADAS Y NO RECIBIDOS EN ESTE TRIBUNAL

Nº	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA
	ARAGÓN		
	PROVINCIA: HUESCA		
1	MONZÓN	GRADERÍOS Y VESTUARIOS PISTAS ATLETISMO.	44.208.370
	PROVINCIA: ZARAGOZA		
2	PINA DE EBRO	CONTRATO ADMINISTRATIVO.	117.719.672
	ASTURIAS		
	PROVINCIA: ASTURIAS		
3	GIJÓN	URBANIZACIÓN AVDA. DEL LLANO, ENTRE C/ ORIAMENDI Y C/ ANA MARÍA.	163.347.451
4	GIJÓN	INSTALACIONES PARA EL DEPOSITO FRANCO (ESTACIÓN INTERNACIONAL MERCANCÍAS.)	314.400.703
5	GIJÓN	SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y GARANTÍA CALIDAD PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIVE."	26.000.000
6	GIJÓN	URBANIZACIÓN POLÍGONO Nº 3 DEL SECTOR ROCES.	236.677.875
7	GIJÓN	URBANIZACIÓN DE LA CALLE OSCAR OLAVARRIA.	49.560.918
8	GIJÓN	CONSERVACIÓN Y ENTRETENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS INSTALACIONES.	124.750.000
9	GIJÓN	EDIFICACIÓN DEL MUSEO DEL FERROCARRIL.	199.203.724
	CANTABRIA		
	PROVINCIA: CANTABRIA		
10	SANTOÑA	CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA.	58.000.000
	CASTILLA Y LEÓN		
	PROVINCIA: LEÓN		
11	LEÓN	MATERIALES CON DESTINO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RONDA ESTE (FASE I).	42.005.992
12	LEÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PASEO DE LA FACULTAD.	267.931.998

Nº	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA
	MADRID		
	PROVINCIA: MADRID		
13	FUENLABRADA	POLIDEPORTIVO CUBIERTO (DESGLOSADO DE LA FASE FINAL).	307.300.000
14	FUENLABRADA	POLIDEPORTIVO CUBIERTO (DESGLOSADO DE LA FASE FINAL).	413.400.000
15	FUENLABRADA	CENTRO E.G.B. EN EL BARRIO DE EL NARANJO.	341.300.000
16	FUENLABRADA	CENTRO DE E.G.B. EN EL BARRIO DE NUEVO VERSALLES.	341.300.000
17	FUENLABRADA	CENTRO SOCIOCULTURAL DEL PARQUE DE LA PAZ.	170.000.000
18	FUENLABRADA	CENTRO DE LA TERCERA EDAD "LAS VILLAS".	139.700.000
19	FUENLABRADA	ACCESO Y ACOMETIDAS A C.P. EN EL CAMINO DE LA CARRERA.	26.500.000
20	FUENLABRADA	POLIDEPORTIVO DE LA CUEVA.	63.900.000
21	FUENLABRADA	SECTOR OESTE DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DE LA C/ DE LA PLAZA.	49.900.000
22	FUENLABRADA	COMEDOR EN EL C.P. GINER DE LOS RÍOS.	53.700.000
23	FUENLABRADA	PABELLÓN DE SERVICIOS EN EL C.P. LEÓN FELIPE.	59.500.000
24	FUENLABRADA	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SISTEMA DE TRATAM.INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.	50.000.000
25	FUENLABRADA	ESTRUCTURA METÁLICA DEL CENTRO INSTITUCIONAL.	25.100.000
26	FUENLABRADA	MATERIAL DE E.G.B. HOMOLOGADO POR EL Mº. DE E. Y C.	37.900.000
27	FUENLABRADA	ACERAS DIVERSAS EN BARRIOS DE LA CIUDAD.	58.800.000
28	MORATA DE TAJUÑA	CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO.	176.722.389
29	VALDEMORO	AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1ª FASE.	135.000.000

ANEXO II.3.2.
1990

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES

A) CONTRATOS DE OBRAS - 1990

Nº. ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
	ARAGÓN			
	PROVINCIA: HUESCA			
1-(121)	DIPUTACIÓN DE HUESCA	REFORMA Y ACONDIC. POLICLÍNICA QUIRÚRGICA DE FRAGA.	131.028.413	*
2-(122)	DIPUTACIÓN DE HUESCA	REDAC. PROYEC. CONSTRUC. DE 4 PABELLONES POLID. EN LANAJA, BENABARRE Y AYERBE.	171.000.000	*
3-(123)	FRAGA	RESIDENCIA DE ANCIANOS. 1ª FASE.	75.823.721	*
4-(124)	HUESCA	DOS MÓDULOS SERV. POLIDEPORTIVO DEL POLÍGONO DEL PERPETUO SOCORRO.	32.381.928	*
	PROVINCIA: TERUEL			
5-(215)	DIPUTACIÓN DE TERUEL	AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN CTRA. VENTA DE LA PINTADA-MOLINOS.	64.106.408	*
	PROVINCIA: ZARAGOZA			
6-(228)	CALATAYUD	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA ASISTIDA TERCERA EDAD.	370.632.460	*
7-(229)	CALATAYUD	REHABILITACIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.	26.098.728	*
	ASTURIAS			
	PROVINCIA: ASTURIAS			
8-(171)	AVILÉS	REHABILITACIÓN DE ANTIGUA FÁBRICA DE CURTIDOS MARIBONA.	461.146.431	*
9-(172)	CANGAS DE NARCEA	MERCADO DE GANADOS TERMINACIÓN.	101.017.872	*
	BALEARES			
	PROVINCIA: BALEARES			
10-(051)	CALVIA	REMODELACIÓN ÁREA URBANA MAGALLUF. FASE 2ª.	149.672.042	*
11-(052)	CALVIA	REMODELACIÓN ÁREA URBANA MAGALLUF, FASE III.	361.524.567	*
12-(053)	CALVIA	REMODELACIÓN Pº. MARÍTIMO Y ACCESOS PLAYA MAGALLUF.	245.650.927	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

Nº. ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
13-(055)	CALVIA	ACOMETIDAS ALCANTARILLADO COSTA DE LA CALMA.	43.209.047	*
14-(059)	FERRERIES	ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES.	80.125.497	*
15-(060)	EIVISSA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR "O" DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO.	129.828.633	*
16-(062)	EIVISSA	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE E.G.B. DE 8 UNIDADES Y 2 PREESCOLAR.	104.032.244	*
17-(063)	EIVISSA	2ª FASE DEL PROYEC. URBANIZ. DE ESPOUET, SES FIGUERES.	104.048.406	*
18-(072)	SAN JOSÉ	REMODELACIÓN Y URBANIZACIÓN CARRER BEGONIA Y CARRER MURTRA.	99.988.446	*
19-(073)	SAN JOSÉ	URBANIZACIÓN DEL FRENTE MARÍTIMO DE LA BAHÍA DE PORTMANY.	526.648.519	*

CANTABRIA

PROVINCIA: CANTABRIA

20-(201)	PIELAGOS	ALUMBRADO PÚBLICO EN RENEDO.	86.064.989	*
21-(209)	TORRELAVEGA	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Bº LA INMOBILIARIA, 1ª FASE.	109.417.229	*
22-(308)	TORRELAVEGA	REMODELACIÓN PLAZA DE LA LLAMA.	67.433.912	*
23-(309)	TORRELAVEGA	URBANIZACIÓN DE ACCESO AL COLEGIO PÚBLICO DEL BARRIO COVADONGA.	49.998.022	*
24-(311)	TORRELAVEGA	MODIFICACIÓN CONTRATO PROYECTO NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA.	166.240.890	*

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA: ALBACETE

25-(031)	ALBACETE	AMPLIACIÓN PARQUE LINEAL.	145.000.000	*
26-(034)	ALBACETE	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MATADERO MUNICIPAL.	306.736.543	*
27-(035)	ALMANSA	URBANIZACIÓN CALLES PABLO NERUDA Y ADYACENTES.	156.816.782	*
28-(036)	ALMANSA	ESTABILIZACIÓN DE LOS AGRIETAMIENTOS DEL CASTILLO.	47.087.380	*
29-(037)	ALMANSA	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL.	49.532.718	*
30-(038)	CASAS-IBAÑEZ	RESIDENCIA DE ANCIANOS.	80.000.000	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Cont.) ANEXO II.3.2/1990

Nº. ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
31-(039)	FUENTE-ÁLAMO	CONSTRUC. 15 VIVIENDAS RÉGIMEN ESPECIAL.	49.500.000	*
32-(040)	RODA (LA)	CONSTRUCCIÓN 1ª FASE CASA DE LA CULTURA.	50.000.000	
33-(041)	RODA (LA)	CONSTRUCCIÓN 2ª FASE CASA DE LA CULTURA.	50.000.000	
	PROVINCIA: CIUDAD REAL			
34-(105)	DAIMIEL	REHABILITACIÓN TEATRO AYALA.	32.840.439	*
35-(107)	PUERTOLLANO	OBRAS ADECUACIÓN ZONA SUR PASEO SAN GREGORIO.	247.365.963	
36-(108)	TOMELLOSO	CONSTRUCCIÓN RECINTO DE PISCINA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	100.262.585	*
	PROVINCIA: CUENCA			
37-(253)	CUENCA	CONSTRUCCIÓN MERCADO MAYORISTA EN CUENCA.	193.527.927	*
38-(254)	CUENCA	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO. Iª FASE.	128.701.210	*
39-(110)	SISANTE	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD.	24.000.000	*
	PROVINCIA: GUADALAJARA			
40-(111)	DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA	VIAL QUE UNE C-204 CON BRIHUEGA, PASANDO POR GUALDA, HENCHE, SOMOLINOS ETC.	135.413.528	*
41-(112)	AZUQUECA DE HENARES	OBRAS PISTA POLIDEPORTIVA, FRONTÓN Y GRADERÍO.	25.909.259	*
42-(113)	AZUQUECA DE HENARES	OBRAS DEL FORO CÍVICO. 1ª FASE.	70.000.000	*
	PROVINCIA: TOLEDO			
43-(216)	DIPUTACIÓN DE TOLEDO	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA MANCOMUNIDAD CABEZA DEL TORCON.	260.000.000	*
44-(217)	DIPUTACIÓN DE TOLEDO	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ALMENDRAL DE LA CAÑADA, HINOJOSA DE S. VICENTE Y OTROS.	422.501.222	*
45-(218)	DIPUTACIÓN DE TOLEDO	REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETERA PROVINCIAL DE MENASALBAS A LA C-401	31.623.799	*
46-(219)	DIPUTACIÓN DE TOLEDO	ALUMBRADO PÚBLICO EN NAVALCÁN, SECTORES A Y D.	35.424.624	*
47-(220)	TALAVERA DE LA REINA	URBANIZACIÓN RONDA CAÑILLO.	132.004.732	*
48-(221)	TOLEDO	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS V.P.O.	952.744.221	

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

Nº. ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
49-(222)	VILLA DE DON FADRIQUE	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES.	48.826.000	*

CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA: ÁVILA

50-(042)	DIPUTACIÓN DE ÁVILA	CARRETERA PUERTO DE CHIA-NAVACEPEDILLA DE CORNEJA.	112.786.471	*
51-(043)	DIPUTACIÓN DE ÁVILA	ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAN LORENZO DE TORMES.	25.376.711	*
52-(045)	ÁVILA	REDAC. DE PROYECTO Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JARDÍN DEL RASTRO.	319.263.268	*

PROVINCIA: BURGOS

53-(083)	DIPUTACIÓN DE BURGOS	CARRETERA BU-P-8104 BELORADO PRADOLUENGO 1ª FASE.	238.652.629	*
54-(084)	BURGOS	MEDIDAS DE SEGURIDAD CAMPO FÚTBOL EL PLANTÍO.	84.716.800	*
55-(093)	MIRANDA DE EBRO	CONSTRUCCIÓN DE 56 Y 48 VIVIENDAS DE P.O Y P.M. EN LA RONDA DEL FERROCARRIL.	656.044.056	

PROVINCIA: LEÓN

56-(129)	DIPUTACIÓN DE LEÓN	Cº DE ACCESO AL CIRCO DEL CEBOLLEDO.	70.000.000	*
57-(130)	DIPUTACIÓN DE LEÓN	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DEL NUEVO PTE. SOBRE RÍO ERIA.	80.000.000	*
58-(131)	DIPUTACIÓN DE LEÓN	ENSANCHE MEJORA FIRME CTA. P-2 DE LEÓN A LA BAÑEZA TRAMO FONTECHA A LA N-630.	260.000.000	*
59-(132)	DIPUTACIÓN DE LEÓN	MEJORA DEL C.V. DE HERVEDEDO A LA VALGOMA.	40.000.000	*

PROVINCIA: PALENCIA

60-(190)	PALENCIA	TRATAMIENTO PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.	60.000.000	*

PROVINCIA: SALAMANCA

61-(193)	DIPUTACIÓN DE SALAMANCA	ACONDIC. REFUERZO FIRME EN GUIJUELO A LINARES DE RIOFRIO.	188.302.431	*
62-(194)	DIPUTACIÓN DE SALAMANCA	ACONDIC. TRAZADO CV-159 Y C.V. 135 SOTOSERRANO A PINEDAS.	215.452.830	*
63-(195)	DIPUTACIÓN DE SALAMANCA	OBRAS ACONDIC. DEL C.V. 51 TRAMO L-320 ALDEAVILA DE RIBERA.	200.000.000	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Cont.) ANEXO II.3.2/1990

Nº. ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
64-(199)	SALAMANCA	CONSTRUCCIÓN COLECTOR BUENAVISTA VALHONDO.	233.112.304	*
65-(200)	SALAMANCA	REMODELACIÓN DEL MERCADO DE SAN JUAN.	113.212.150	*
	PROVINCIA: SEGOVIA			
66-(313)	DIPUTACIÓN DE SEGOVIA	MEJORA FIRME ASFÁLTICO CTRAS. Nº 83 DE SEPÚLVEDA A LOS CORTOS Y OTRAS.	30.207.000	*
67-(314)	DIPUTACIÓN DE SEGOVIA	ENSANCHE Y MEJORA DE LA CTRA. Nº18 C-505 A ETREROS (KMS. 0.000 AL 12,167).	127.300.000	*
68-(210)	SEGOVIA	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FASE FINAL.	376.320.398	*
	PROVINCIA: SORIA			
69-(213)	SORIA	REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL PARA CUARTEL POL. MUPAL.	46.147.469	*
	PROVINCIA: VALLADOLID			
70-(327)	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	ELIMINACIÓN CURVA CONSTRUC. PUENTE V.P. 8000.	25.000.000	
71-(223)	ISCAR	CASA DE CULTURA 2ª FASE.	24.999.998	
	EXTREMADURA			
	PROVINCIA: BADAJOZ			
72-(231)	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	RESTAURACIÓN RECINTO DEFENSIVO "VAUBAN". 2ª FASE	73.355.881	*
73-(232)	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	DEPURADORA RÍO GUADIANA. VFCA. DE BARROS	510.000.000	*
74-(233)	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	MEJORA DE CARRETERAS PROV.(VALENCIA DE MOMBUEY A VILLANUEVA DEL FRESNO) 3ª FASE.	250.000.000	*
75-(235)	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	REPARACIÓN DE LA CARRETERA PROVINCIAL LA NAVA DE SANTIAGO A MONTIJO.	64.655.403	*
76-(236)	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	E.D.A.R. EN MONTIJO Y PUEBLA DE LA CALZADA.	387.660.000	*
77-(237)	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	MEJORA C.P. LA PARRA A N-432, 5ª FASE.	45.779.500	*
78-(046)	BADAJOZ	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO.	25.658.470	*
79-(047)	JEREZ DE LOS CABALLEROS	PLAN DE EMPLEO RURAL.	34.920.141	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

Nº. ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
80-(350)	MÉRIDA	CASA CULTURA.	404.580.897	*
81-(351)	MÉRIDA	REORDENACIÓN RAMBLA.	106.481.188	*
	PROVINCIA: CÁCERES			
82-(096)	DIPUTACIÓN DE CÁCERES	DEPURADORA DE RESIDUALES EN CORIA.	80.000.000	*
83-(097)	DIPUTACIÓN DE CÁCERES	SAN MARTÍN DE TREVEJO, ADECUA. Y MEJORA DEL C.V. A LA CC-513.	130.000.000	*
84-(098)	DIPUTACIÓN DE CÁCERES	ACONDICIO. Y ENSANCHE C.V. ROMANGORDO Y N.V. (HIGUERA).	160.000.000	*
85-(099)	DIPUTACIÓN DE CÁCERES	C.V. CC-526 POR GATA Y TORRE DE DON MIGUEL A LA CC513, 2ª FASE	152.000.000	*
86-(100)	CÁCERES	CONSTRC. MERCADO MINORISTA EN RONDA DEL CARMEN.	72.731.978	
87-(104)	SERRADILLA	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS.	26.864.000	
	MADRID			
	PROVINCIA: MADRID			
88-(146)	ALCALÁ DE HENARES	REHABILITACIÓN ANTIGUO MATADERO PARA CENTRO DE COMUNIDADES.	69.999.990	*
89-(151)	GETAFE	CONSTR. CENTRO CÍVICO CULTURAL CONSERVATORIO Y AUDITORIO BARRIO BUENAVISTA.	341.959.559	*
90-(152)	GETAFE	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO DEL BERCIAL.	99.817.818	*
91-(001)	MADRID	OBRAS DE URBANIZACIÓN PARCELA E DE SAN BLAS (2ª FASE).	87.374.959	*
92-(012)	MADRID	REMODELACIÓN PZ. DE LA IGLESIA Y VIARIO LOCAL DEL CASCO ANTIGUO VICÁLVARO.	150.349.881	*
93-(013)	MADRID	REMATES URBANIZACIÓN MANOTERAS Y PORTUGALETE.	194.999.062	*
94-(014)	MADRID	CONST. CENTRO 3ª EDAD, ERRADICACIÓN MARGINAL Y RESID. ÁREA DE EQUIPAMIENTO.	215.218.898	*
95-(015)	MADRID	CONSTRUCCIÓN PARQUE CUÑA VERDE DE LA LATINA 1ª FASE.	454.677.876	*
96-(016)	MADRID	ACCESO PQ. LINEAL MANZANARES Y PASO INF. BAJO FF.CC. (PUENTE).	118.465.836	*
97-(017)	MADRID	OBRAS POLID. ALUCHE, PROGRA. 1990-1991.	93.800.000	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Cont.) ANEXO II.3.2/1990

Nº. ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
98-(018)	MADRID	CONSTRUCCIÓN MUSEO DE LA CIUDAD.	1.532.416.322	*
99-(019)	MADRID	EQUIPAMIENTO TÉCNICO DEL TEATRO DE LA VAGUADA.	390.072.768	*
100-(020)	MADRID	COMPLEMENTARIO AL DE C.S. SOCIALES CHAMARTÍN.	59.999.999	*
101-(021)	MADRID	ADICIONAL DEL DE URBANIZACIÓN ANILLO VERDE VICÁLVARO (P.A.U. 12) 2ª FASE	72.045.268	
102-(022)	MADRID	MODIFICACIÓN SISTEMA DE PASOS INFERIORES DE LA PZ. CRISTO REY Y AV. VICTORIA.	366.315.225	*
103-(026)	MADRID	APARCAMIENTO Y REFORMA DEL ENTORNO DEL MERCADO DE LA CEBADA.	434.782.415	*
104-(158)	POZUELO DE ALARCÓN	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL. (1ª FASE).	49.996.338	*

MURCIA

PROVINCIA: MURCIA

105-(354)	CARTAGENA	MEJORA PAV. Y RED DE AGUA EL ALGAR III FASE.	67.544.516	
106-(169)	ALCANTARILLA (LOS)	AMPLIACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	236.807.848	

LA RIOJA

PROVINCIA: LA RIOJA

107-(140)	LOGROÑO	AMPLIACIÓN Y MEJORA ABASTECIMIENTO AGUAS A LA CIUDAD.	896.137.741	
108-(141)	LOGROÑO	EJECUCIÓN 2 ÚLTIMAS FASES DE LA URBANIZACIÓN PARQUE DEL EBRO.	319.199.848	*
109-(142)	LOGROÑO	COMPLEJO DEPORTIVO Y PISCINA MUNICIPAL "LAS NORIAS".	1.206.975.000	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

ANEXO II.3.3.
1990

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES

B) CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS - 1990

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
	ASTURIAS			
	PROVINCIA: ASTURIAS			
1-(170)	AVILÉS	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES RECOGIDA BASURAS.	32.000.000	
2-(179)	OVIEDO	SERV. COMIDAS EN COMEDORES ESCOLARES.	40.000.000	*
	BALEARES			
	PROVINCIA: BALEARES			
3-(061)	EIVISSA	AMPLIACIÓN PLANTILLA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS PARA EJEC. 1990.	40.248.000	*
	CANTABRIA			
	PROVINCIA: CANTABRIA			
4-(310)	TORRELAVEGA	MODIFICACIÓN CONTRATO MATADERO MUPAL.	0	*
	CASTILLA-LA MANCHA			
	PROVINCIA: ALBACETE			
5-(032)	ALBACETE	CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR EXPLOT. DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.	1.540.232.837	*
	PROVINCIA: CIUDAD REAL			
6-(106)	PUERTOLLANO	RECOGIDA BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y EXPLOTACIÓN VERTEDERO MUNICIPAL.	208.398.290	*
	CASTILLA Y LEÓN			
	PROVINCIA: PALENCIA			
7-(187)	PALENCIA	INSTALACIÓN Y RETIRADA DE CONTENEDORES DE ESCOMBROS EN DISTINTAS ZONAS.	28.134.400	

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES ANEXO II.3.3/1990

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
8-(188)	PALENCIA	RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y EXPLOTACIÓN VERTEDERO.	329.999.182	*
9-(189)	PALENCIA	PRÓRROGA SERV. AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD.	0	*
	PROVINCIA: SALAMANCA			
10-(196)	CIUDAD-RODRIGO	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIMPIEZA VIARIA Y VERTEDERO.	52.502.873	*
	PROVINCIA: VALLADOLID			
11-(318)	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	SERVICIO DE TRANSPORTE AÑO 1990.	64.894.100	*
	EXTREMADURA			
	PROVINCIA: CÁCERES			
12-(101)	CÁCERES	SERV. RECOGIDA BASURAS, RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA VIARIA, Y OTROS SERVICIOS	320.663.763	*
	MADRID			
	PROVINCIA: MADRID			
13-(149)	ARGANDA	CONSTRUCCION Y EXPLOT. ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS SUBTER. VEHÍCULOS RESIDENTES.	350.171.994	*
14-(003)	MADRID	RETIRADA LODOS EDAR DE BUTARQUE SURORIENTAL Y REJAS.	170.150.000	*
15-(004)	MADRID	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN EDAR SURORIENTAL.	139.000.000	
16-(005)	MADRID	MANTENIMIENTO CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN EDAR DE LA CHINA.	709.000.000	
17-(007)	MADRID	CREACIÓN CONJUNTOS INSTRUMENTALES Y CORALES JUNTAS MUNICIPALES DITR. MADRID.	315.000.000	*
18-(008)	MADRID	TRANSPORTE ESCOLAR ACTIV. EXTRAESCOLARES CURSOS 90-91 Y 91-92	204.342.000	*

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
	MURCIA			
	PROVINCIA: MURCIA			
19-(167)	ÁGUILAS	LIMPIEZA ALCANTARILLADO EN ÁGUILAS.	7.280.000	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

ANEXO II.3.4.
1990

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES

C) CONTRATOS DE SUMINISTROS - 1990

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
	ARAGÓN			
	PROVINCIA: HUESCA			
1-(118)	DIPUTACIÓN DE HUESCA	RENOVACIÓN MAQUINARIA DE LA SECCIÓN VIAS Y OBRAS.	25.000.000	
2-(119)	DIPUTACIÓN DE HUESCA	SISTEMAS CORRESPON. PLAN DE INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS.	35.700.000	
	PROVINCIA: TERUEL			
3-(214)	DIPUTACIÓN DE TERUEL	SUMINISTRO EMULSIÓN ASFÁLTICA.	42.500.000	*
	PROVINCIA: ZARAGOZA			
4-(227)	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO UCI Y QUIRÓFANOS EN HOSPITAL P. NTRA. SRA. DE GRACIA.	41.038.895	*
	ASTURIAS			
	PROVINCIA: ASTURIAS			
5-(175)	OVIEDO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO.	140.000.000	
6-(176)	OVIEDO	SUMINISTRO DE HORMIGONES.	74.000.000	*
7-(178)	OVIEDO	ADQUISICIÓN VESTUARIO Y CALZADO 1990.	27.961.770	*
	BALEARES			
	PROVINCIA: BALEARES			
8-(054)	CALVIA	ADQUISICIÓN MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO.	18.000.000	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
	CASTILLA-LA MANCHA			
	PROVINCIA: ALBACETE			
9-(033)	ALBACETE	SISTEMA RADIOTELEFÓNICO.	31.248.277	*
	CASTILLA Y LEÓN			
	PROVINCIA: BURGOS			
10-(085)	BURGOS	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 1990.	50.973.440	*
	PROVINCIA: LEÓN			
11-(135)	DIPUTACIÓN DE LEÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTO-COMPOSICIÓN PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL.	15.000.000	*
	PROVINCIA: PALENCIA			
12-(186)	PALENCIA	ADQUISICIÓN EQUIPO PROCESO DE DATOS PARA AYUNTAMIENTO.	25.000.000	
	PROVINCIA: VALLADOLID			
13-(319)	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES PARA LOS PARQUES CONSERV. CARRETERAS.	154.305.000	*
14-(321)	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	ADQUISICIÓN SISTEMA INFORMÁ-TICO.	54.000.000	*
15-(322)	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	SUMINISTRO MATERIALES DESTINO PARQUES DE CONSERVACION CARRE-TERAS.	65.800.000	*
16-(323)	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	ADQUISICIÓN MAQUINARIA DESTINO PARQUES CONSERVACION DE CARRE-TERAS.	50.500.000	*
	PROVINCIA: ZAMORA			
17-(226)	DIPUTACIÓN DE ZAMORA	ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO.	43.981.472	*
	EXTREMADURA			
	PROVINCIA: BADAJOZ			
18-(234)	DIPUTACION DE BADAJOZ	SUMINISTRO VÍVERES PARA EL AÑO 1991 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO A.D.A).	77.117.751	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
	MADRID			
	PROVINCIA: MADRID			
19-(153)	GETAFE	SUMINISTRO DE VEHÍCULO AUTO-ESCALA AUTOMÁTICA DE 25 MTS. PARQUE BOMBEROS MPAL.	36.000.000	
20-(010)	MADRID	MAQUINA PARA INSTALAR EN GALERÍA DE TIRO.	33.423.000	
21-(011)	MADRID	AMPLIACIÓN ZONA CENTRALIZADA SEÑALES LUMINOSAS REGULADORAS DE CIRCULACIÓN (2ªF).	650.000.000	*
22-(028)	MADRID	ADQUISICIÓN OBRAS DE INTERÉS ARTÍSTICO.	80.244.864	*
	LA RIOJA			
	PROVINCIA: LA RIOJA			
23-(139)	LOGROÑO	CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE MINICENTRAL ELÉCTRICA ABASTEC. AGUAS.	105.076.122	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

ANEXO II.3.5.
1990

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES

D) OTROS CONTRATOS - 1990

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
	ARAGÓN			
	PROVINCIA: HUESCA			
1-(120)	DIPUTACION DE HUESCA	CAMPAÑA Y PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA.	34.500.000	*
	ASTURIAS			
	PROVINCIA: ASTURIAS			
2-(173)	OVIEDO	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	92.705.491	*
	CANTABRIA			
	PROVINCIA: CANTABRIA			
3-(312)	TORRELAVEGA	ADQUISICIÓN INMUEBLE.	200.000.000	*

CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA: ÁVILA

4-(044)	ÁVILA	ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD.	39.200.000	*

PROVINCIA: BURGOS

5-(086)	BURGOS	VENTA DE PARCELA R-16.A) UNIDAD ACT.C-9	73.795.500	
6-(087)	BURGOS	VENTA PARCELA R-12.B) UNIDAD ACT. C-9.	91.091.500	
7-(088)	BURGOS	VENTA PARCELA R-1.B).	50.248.000	
8-(089)	BURGOS	VENTA PARCELA B.3) UNIDAD ACT. C-4.	520.000.000	
9-(090)	BURGOS	VENTA PARCELA 3.B) PLAN PARCIAL JEREZ.	158.982.400	

PROVINCIA: LEÓN

10-(133)	DIPUTACION DE LEÓN	REDACCIÓN DE TRABAJOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.	44.026.167	*

PROVINCIA: SALAMANCA

11-(192)	DIPUTACION DE SALAMANCA	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS.	34.500.000	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Cont.) **ANEXO II.3.5/1990**

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
12-(197)	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	OPERACIÓN DE TESORERÍA.	31.500.000	*
13-(198)	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	PRÉSTAMO B.C.L.	30.000.000	*

PROVINCIA: VALLADOLID

14-(320)	DIPUTACION DE VALLADOLID	OPERACIÓN ESPECIAL DE TESORERÍA PARA ANTICIPAR A LOS AYUNT. LA RECAUD. TRIBUTOS	800.000.000	*
15-(324)	DIPUTACION DE VALLADOLID	PRÉSTAMO PARA FINANCIAR DIVERSAS OBRAS E INVERSIONES.	524.435.668	*
16-(325)	DIPUTACION DE VALLADOLID	PRÉSTAMO PARA FINANCIAR EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS.	216.795.000	*
17-(326)	DIPUTACION DE VALLADOLID	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS APORTACIONES AL PLAN DE OBRAS Y AL CONVENIO DEL INEM.	158.136.662	*

EXTREMADURA

PROVINCIA: CÁCERES

18-(102)	CÁCERES	ENAJENACIÓN LOCALES PARCELAS 7,8 POLG. ISABEL MOCTEZUMA ETC.	42.324.801	*
19-(103)	CÁCERES	ADQUISICIÓN DE 10.867,25 M2. TERRENOS SITOS EN AVDA. HISPANIDAD Y SAN FRANCISCO.	53.945.029	*

MADRID

PROVINCIA: MADRID

20-(143)	ALCALÁ DE HENARES	REDACCIÓN PROYECTOS Y DIRECCIÓN OBRAS URBANIZACIÓN DISTRITOS.	35.750.000	*
21-(144)	ALCALÁ DE HENARES	ADQUISICIÓN TERRENOS CON DESTINO A RESERVA EDUCATIVA.	100.000.000	*
22-(145)	ALCALÁ DE HENARES	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN COLEGIOS PÚBLICOS.	50.000.000	
23-(002)	MADRID	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD LIMPIEZA URBANA.	48.000.000	*
24-(009)	MADRID	LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS VILLA VALLECAS .	25.080.000	*
25-(025)	MADRID	CONSERVACION PREVENTIVA, PEQUEÑAS REFORMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	250.000.000	*
26-(027)	MADRID	SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ESCULTORES.	114.999.997	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Cont.) **ANEXO II.3.5/1990**

Nº ORDEN	CORPORACIÓN LOCAL	OBJETO	CUANTÍA	(*)
27-(029)	MADRID	VERANOS DE LA VILLA 1990, INFRAESTRUTURA CUARTEL DEL CONDE DUQUE.	28.000.000	*
28-(030)	MADRID	VERANOS DE LA VILLA 1990, MURALLA ÁRABE.	33.000.000	*

MURCIA

PROVINCIA: MURCIA

29-(355)	CARTAGENA	LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES.	110.000.000	*

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

ANEXO FCI - 1
1990

FCI.- ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO - 1990
CLASIFICACIÓN POR SECTORES DE INVERSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL EJERCICIO DE 1990
(En millones de pesetas)

FCI/EJERCICIO	Crédito Inicial	Incorporaciones	Otros Aumentos	Bajas	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	Pagos (1)	Pendientes de Pago	Remanente	
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO										
1989		866			866	277	277		589	
1988		10			10	10	10			
Resto FCI		60			60	44	44		16	
TOTAL	-	**936**	-	-	**936**	**331**	**331**	-	**605**	
MINISTERIO DE JUSTICIA										
1989		50			50	20	20			
1988										
Resto FCI										
TOTAL	-	**50**	-	-	**50**	**20**	**20**	-	-	(2)
TOTAL ADMINISTRACIÓN GRAL DEL ESTADO		986			986	351	351		605	(2)
JUNTA DE CONST INST Y EQUIPO ESCOLAR										
1989		1014			1014	652	652		362	
1988										
Resto FCI										
TOTAL	-	**1014**	-	-	**1014**	**652**	**652**	-	**362**	
CONF HIDROGRÁFICA DEL NORTE DE ESPAÑA										
1989		2			2	2	2			
1988										
Resto FCI										
TOTAL	-	**2**	-	-	**2**	**2**	**2**	-	**0**	
TOTAL ADMIÓN. INSTITUCIONAL DEL ESTADO	-	**1016**	-	-	**1016**	**654**	**654**	-	**362**	
TOTAL GESTIONADO POR EL ESTADO										
1989		1932			1932	951	951		951	(2)
1988		10			10	10	10			
Resto FCI		60			60	44	44		16	
TOTAL	-	**2002**	-	-	**2002**	**1005**	**1005**	-	**967**	(2)

(1) Pagos propuestos u ordenados
(2) No se incluye el remanente que correspondería al M°. de Justicia, por haber sido aplicado indebidamente a otro proyecto ajeno al FCI por su Centro Gestor.

ANEXO FCI - 2
1990

FCI. - ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO - 1990
CLASIFICACIÓN POR SECTORES DE INVERSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL EJERCICIO DE 1990
(En millones de pesetas)

FCI/EJERCICIO	Obras Públicas	Agricult.,Pesca y Alimentación	Vivienda	Transportes y Comunic.	Sanidad	Educación	Otros	Totales
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO								
1989	277	-	-	-	-	-	-	277
1988	2	-	8	-	-	-	-	10
Resto FCI	-	-	44	-	-	-	-	44
TOTAL	279	-	52	-	-	-	-	331
CONFEDER HIDROGRAFICA NORTE ESPANA								
1989			-	-	-	-	20	20
1988			-	-	-	-	-	-
Resto FCI			-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	20	20
TOTAL ADMINISTRACIÓN GRAL. DEL ESTADO	279	-	52	-	-	-	20	351
JUNTA DE CONST INST Y EQUIPO ESCOLAR								
1989	-	-	-	-	-	652	-	652
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto FCI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	652	-	552
CONF HIDROGRÁFICA DEL NORTE DE ESPANA								
1989	2	-	-	-	-	-	-	2
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto FCI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	-	-	-	-	-	-	2
TOTAL ADMÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO	2	-	-	-	-	652	-	654
TOTAL ESTADO								
1989	279	-	-	-	-	652	20	951
1988	2	-	8	-	-	-	-	10
Resto FCI	-	-	44	-	-	-	-	44
TOTAL	281	-	52	-	-	652	20	1005

Anexo FCI-3
1990

FCI. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO - 1990

JUNTA DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y EQUIPO ESCOLAR

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMUNIDADES AUTONOMAS FCI/90

(En millones de pesetas)

COMUNIDAD AUTÓNOMA	CRÉDITO INICIAL	INCORPOR REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZADOS	REMANENTE	% EJECUC.
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-	-
MADRID	-	122	122	14	14	108	11,5
EXTREMADURA	-	560	560	549	549	11	98,0
GALICIA	-	4	4	-	-	4	-
CASTILLA-LA MANCHA	-	-	-	-	-	-	-
MURCIA	-	55	55	55	55	-	100
BALEARES	-	6	6	-	-	6	-
CEUTA	-	265	265	34	34	231	12,8
MELILLA	-	2	2	-		2	-
TOTALES		1.014	1.014	652	652	362	64,3

Anexo FCI-4
1990

FCI. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO - 1990

JUNTA DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y EQUIPO ESCOLAR

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA REMANENTES DE CREDITO
INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR PROGRAMA DE GASTO FCI/90
(En millones de pesetas)

PROGRAMAS DE GASTO	CREDITO INICIAL	INCORPOR REMANENTES DE CREDITO	CREDITO DEFINITIVO	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS REALIZADOS	REMANENTE	% EJECUC.
EDUCACION PREESCOLAR	-	34	34	-	-	34	-
ENSEÑANZ GRAL BASICA	-	403	403	165	165	238	40.9
ENSEÑANZAS MEDIAS	-	442	442	417	417	25	94,3
ENSEÑANZAS UNIVERS.	-	58	58	57	57	1	98,2
EDUCACION ESPECIAL	-	77	77	13	13	64	16,9
TOTALES		**1.014**	**1.014**	**652**	**652**	**362**	**64,3**

ANEXO FCI-5
1990

FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

LIQUIDACION DE LOS CREDITOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS

(En millones de pesetas)

COMUNIDAD AUTONOMA	CREDITOS INICIALES	INCORPORACIONES	OTROS AUMENTOS	BAJAS	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO
ANDALUCIA	54 841	24.270	—	7.299	71.812	51.811	33.181	18.630	20.001
ARAGON	—	1.883	—	—	1.883	1.395	—	1.395	488
CANARIAS	13 165	5.306	872	—	19.343	13.356	8.328	5.028	5.987
CANTABRIA	—	632	—	—	632	261	—	261	371
CASTILLA LA MANCHA	11.526	1.060	—	—	12.586	7.840	5.740	2.100	4.746
CASTILLA Y LEON	7.972	4.365	—	—	12.337	7.161	7.159	2	5.176
CATALUÑA	—	11.218	—	—	11.218	11.218	11.218	—	—
EXTREMADURA	13.994	7.839	—	—	21.833	14.032	10.152	3.880	7.801
FORAL DE NAVARRA	—	154	—	—	154	154	154	—	—
GALICIA	19.446	10.486	—	—	29.932	23.114	18.448	4.666	6.818
ISLAS BALEARES	—	31	—	—	31	29	—	29	2
LA RIOJA	—	142	—	—	142	142	142	—	—
MADRID	—	2.154	—	—	2.154	2.154	—	2.154	—
PAIS VASCO	—	1.565	—	34	1.531	1.122	1.011	111	409
PRINCIPADO ASTURIAS	1.097	—	—	—	1.097	1.057	1.057	—	40
REGION DE MURCIA	4.680	—	—	—	4.680	4.680	4.013	667	—
VALENCIANA	7.242	4.487	—	—	11.729	11.729	11.729	—	—
TOTAL	133.963	75.592	872	7.333	203.094	151.255	112.332	38.923	51.839

ANEXO FCI-6
1990

FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POR SECTORES DE INVERSION

(En millones de pesetas)

COMUNIDAD AUTONOMA	OBRAS PUBLICAS	AGRIC., PESCA Y GANADERIA	VIVIENDA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	SANIDAD	EDUCACION	OTRAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	TOTAL
ANDALUCIA	12.131	7.703	8.704	1.660	2.063	11.962	7.568	51.811
ARAGON	920	438	—	—	6	31	—	1.395
CANARIAS	7.586	905	—	—	255	3.199	1.411	13.356
CANTABRIA	215	2	—	—	28	16	—	261
CASTILLA-LA MANCHA	1.186	3.372	1.701	34	162	1.183	202	7.840
CASTILLA Y LEON	3.502	2.080	543	54	—	—	982	7.161
CATALUÑA	—	—	1.089	8.022	—	2.107	—	11.218
EXTREMADURA	8.020	4.298	446	105	241	511	413	14.032
FORAL DE NAVARRA	—	—	154	—	—	—	—	154
GALICIA	7.611	4.878	4.351	488	910	4.092	786	23.114
ISLAS BALEARES	16	—	—	—	—	—	13	29
LA RIOJA	142	—	—	—	—	—	—	142
MADRID	447	211	1.071	224	20	181	—	2.154
PAIS VASCO	168	—	481	—	—	473	—	1.122
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.057	—	—	—	—	—	—	1.057
REGION DE MURCIA	3.094	661	598	65	9	121	132	4.680
VALENCIANA	2.676	205	1.896	4.272	3	1.831	647	11.729
TOTAL	48.970	24.749	21.034	14.924	3.697	25.707	12.174	151.255

INFORMES ESPECIALES RELATIVOS AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (EJERCICIOS 1988, 1989 Y 1990) Y AL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE (LAS PALMAS) (EJERCICIOS 1988 Y 1989)

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a) y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 9.1., 11.b), 12 y 14.1 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, en especial los artículos 27, 28.1., 31.b) y d), 34, 41 y 44 de dicha Ley, en relación con los resultados de la fiscalización realizada al Ayuntamiento de Zaragoza, referida a los años 1988 a 1990, ambos incluidos, **HA ACORDADO**, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1993, **APROBAR** el presente informe y su **ELEVACION**

A LAS CORTES GENERALES

INFORME DE LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, REFERIDO A LOS AÑOS 1988 A 1990, AMBOS INCLUIDOS

SUMARIO

1. Introducción.
   - 1.1. Cuestiones previas.
   - 1.2. Descripción de la Corporación.
   - 1.3. Organización de la Corporación.
   - 1.4. Documentación examinada y legislación aplicable.
   - 1.5. Control interno
2. Gestión presupuestaria y contable
   - 2.1. Presupuestos.
   - 2.2. Modificaciones de los presupuestos.
   - 2.3. Liquidación de los presupuestos.
   - 2.4. Gestión contable y cuentas rendidas.
   - 2.5. Análisis de los mandamientos de pago, en firme y a justificar
3. Gestión financiera.
   - 3.1. Análisis de los ingresos
   - 3.2. Análisis de los gastos.
   - 3.3. Estudio de la Tesorería y la Recaudación
     - 3.3.1. Tesorería.
     - 3.3.2. Recaudación.
   - 3.4. Endeudamiento.
4. Subvenciones y transferencias.
   - 4.1. Subvenciones obtenidas.
   - 4.2. Subvenciones concedidas.
5. Gestión del inmovilizado material
   - 5.1. Inventario de bienes
   - 5.2. Enajenación de suelo municipal
6. Procedimientos contractuales
   - 6.1. Contratación de obras
   - 6.2. Servicios, suministros y otros.
7. Servicios públicos, Organismos y Empresas municipales
   - 7.1. Patronato de la Universidad Popular.
   - 7.2. Patronato Municipal de Teatros.
   - 7.3. Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L.
8. Ordenación territorial y urbanismo
   - 8.1. Actuaciones urbanísticas.
   - 8.2. Patrimonio Municipal del Suelo.
   - 8.3. Control y disciplina urbanística.
9. Trámite de alegaciones
10. Conclusiones y recomendaciones
    - 10.1. Conclusiones.
    - 10.2. Recomendaciones
11. Anexos.

PRESENTACION DEL INFORME

El presente procedimiento fiscalizador se ha realizado en cumplimiento del acuerdo aprobado por el Pleno de este Tribunal, en sesión de 30 de marzo de 1992, estableciéndose las directrices técnicas a seguir en sesión de 30 de setiembre del mismo año.

La fiscalización se extiende a los años 1988 a 1990, ambos inclusive y se propuso por no haber remitido, en su momento, las cuentas de los ejercicios de 1988, 1989 y 1990, no obstante los reiterados requerimientos realizados por este Tribunal

Los trabajos de comprobación y verificación "in situ" se desarrollaron durante los meses de noviembre de 1992 y enero a mayo de 1993, remitiéndose a la Corporación por escrito de 13 de setiembre de 1993 las actuaciones practicadas y recibiéndose con fecha 14 de octubre las alegaciones presentadas.
La Corporación fiscalizada dirige un Municipio de gran tamaño, el quinto de España, que tenía, en 1990, una población de 592.686 habitantes, con un Presupuesto refundido de 80.156 millones de pesetas, nueve Organismos Autónomos y tres Sociedades Mercantiles con capital integramente propiedad del Ayuntamiento.

El informe se estructura en 9 apartados, de los cuales el primero consiste en una Introducción donde se recogen aspectos generales del Ayuntamiento, su organización y los objetivos de la fiscalización.

Le siguen los puntos 2 al 5 donde se analiza la gestión presupuestaria y contable, la gestión financiera, las subvenciones y el inmovilizado, pasando al apartado 6 con el estudio de los procedimientos contractuales y contemplándose en las dos siguientes, de forma somera, los servicios públicos y la gestión urbanística, analizándose, con más detalle, los Patronatos de la Universidad Popular y de Teatros y la Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L.. Por último se formulan conclusiones y recomendaciones deducidas de las anomalías observadas.

Entre las irregularidades más significativas encontradas se puede señalar la práctica de aprobar modificaciones en los créditos presupuestarios en el ejercicio siguiente al que corresponden, las numerosas salvedades sobre la representatividad de las Cuentas Generales de Presupuesto, la deficiente gestión del Impuesto sobre Solares, la demora en la puesta en funcionamiento de un Servicio de Recaudación en período ejecutivo para todos los valores, la falta de

control de las actuaciones urbanísticas y su coordinación con el Inventario General de Bienes, la inexistencia de un Inventario de los bienes que integran el Patrimonio Municipal del Suelo, y, por último, las anomalías encontradas en las relaciones del Ayuntamiento con la Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L..

El Ayuntamiento estaba aplicando, de forma parcial en ese periodo, un Sistema Integral de Contabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, SICAZ, que anticipa el Sistema de Contabilidad establecido con carácter general en el SICAL, y que no tiene carácter obligatorio hasta el ejercicio de 1992.

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, REFERIDO A LOS AÑOS 1.988 A 1.990, AMBOS INCLUIDOS

1. INTRODUCCION

1.1. *Cuestiones Previas*

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 30 de marzo de 1992, acordó incluir en el programa anual de actuaciones a iniciar en el citado ejercicio la fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza, referida a los ejercicios de 1988 a 1990, ambos inclusive.

Como objetivos de la fiscalización se han fijado los siguientes:

- Verificación de los diferentes estados y registros contables que reflejan la situación financiera y patrimonial de la Corporación.
- Comprobación del cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión económico-financiera municipal.
- Análisis y examen crítico de la documentación contable de los siguientes Servicios Municipales: Patronato de la Universidad Popular, Patronato Municipal de Teatros y Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L.

1.2. *Descripción de la Corporación*

El municipio de Zaragoza es uno de los de mayor superficie de España, con 1.078 kilómetros cuadrados, y una población, al 1 de enero de 1990, de 592.686 habitantes, distribuidos en 20 núcleos de población. Zaragoza es la quinta ciudad de España por el número de habitantes, capital de la provincia del mismo nombre y sede del Gobierno y Parlamento de la Diputación General de Aragón (Comunidad Autónoma de Aragón).

Tiene una actividad económica muy intensa y con tendencia de crecimiento positiva, basada en la industria, el comercio, y los servicios.

1.3. *Organización de la Corporación*

El Pleno de la Corporación está integrado por 27 Concejales, de los que el Alcalde, los tres Tenientes de Alcalde y 8 Concejales forman la Comisión de Gobierno. Se han constituído las siguientes Comisiones informativas, cuya creación es discrecional.

- Urbanismo (Presidente, Primer Teniente de Alcalde, Vicepresidente y 11 Vocales).
- Hacienda y Economía (Presidente, Segundo Teniente de Alcalde, Vicepresidente y 10 Vocales).
- Servicios Públicos y Régimen Interior (Presidente, Vicepresidente y 11 Vocales).
- Cultura y Acción Social (Presidente, Vicepresidente y 11 Vocales).

La Comisión de Hacienda y Economía asume también las funciones atribuídas por la ley a la Comisión Especial de Cuentas, que es de constitución preceptiva.

La Administración municipal está organizada, desde 1988, en las áreas siguientes:

- Alcaldía.
- Urbanismo e Infraestructuras.
- Hacienda y Economía.
- Servicios Públicos y Participación Ciudadana.
- Régimen Interior.
- Cultura y Educación.
- Sanidad y Acción Social.

En 1990 se suprimió el área de Participación Ciudadana y se crearon 10 Juntas Municipales de Distrito, dependientes de la Alcaldía y 18 Juntas Vecinales en el área de Servicios Públicos.

La plantilla de personal ha pasado de tener 4.206 empleados en 1988, a 4.615 en 1990, entre funcionarios de carrera, de empleo y personal laboral.

En el período fiscalizado, los Presupuestos refundidos definitivos de gastos han sido los siguientes:

Ejercicios	Millones de Pesetas	Variación sobre año base
1988	46.216	100
1989	78.679	170
1990	80.156	173

La Corporación tenía en 1990 los siguientes Organismos Autónomos, todos ellos con presupuesto independiente:

1 - Patronato Municipal de Comedores Escolares.
2 - Patronato de las Bibliotecas Públicas.
3 - Patronato Municipal de Teatros.
4 - Patronato Municipal Popular.
5 - Patronato Municipal de la Filmoteca.
6 - Patronato Municipal de Turismo.
7 - Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.
8 - Patronato Municipal de Ballet.
9 - Consorcio de Audiorama.

Asimismo pertenecen al Ayuntamiento, con el cien por cien de su capital social, las siguientes sociedades mercantiles:

- Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L.
- Instalaciones Deportivas Municipales, S.A.
- Zaragoza Cultural, S.A.

Además, la Corporación es propietaria de una participación mayoritaria, del 51 por ciento, en el capital social de Mercazaragoza, S.A.

1.4. *Documentación examinada y legislación aplicable*

Del período sujeto a fiscalización, 1988 a 1990, se han examinado las Cuentas Generales del Presupuesto, de Administración del Patrimonio, Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, Tesorería y Recaudación, así como la documentación contable correspondiente y los expedientes de contratación seleccionados.

Asimismo, se han examinado las cuentas de todos los Organismos Autónomos y Sociedades seleccionando, para profundizar en su análisis, la documentación contable de los siguientes Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles:

- Patronato Municipal de Teatros.
- Patronato de la Universidad Popular.
- Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L.

La fiscalización se ha realizado de forma selectiva y se han utilizado los procedimientos de auditoría pertinentes.

La legislación aplicable en este período se contiene fundamentalmente en las disposiciones siguientes:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/86 de 18, de abril, Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

El sistema de contabilidad aplicable es el establecido en la Instrucción de Contabilidad aprobada por el Decreto de 4 de agosto de 1952 y en la Ley de Haciendas Locales antes citada. La Corporación está aplicando anticipadamente, de forma parcial, la nueva regulación de los Presupuestos y la Contabilidad establecida en la Ley 39/88, a través de las Instrucciones de la Contabilidad de Gastos y de Gestión y Contabilidad de Ingresos, aprobados por el Pleno en 1986 y 1988, respectivamente, desarrollando el Sistema Integral de Contabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza (SICAZ).

1.5. *Control Interno*

La fiscalización de la gestión económica y financiera corresponde a la Intervención General de la Corporación, que la ejerce con regularidad, directamente o a través de sus delegados, tanto en la Administración Municipal como en los Organismos Autónomos, realizándose esta fiscalización en las sociedades mercantiles a través de controles financieros anuales.

Para el ejercicio del control interno de carácter administrativo, el Ayuntamiento tiene establecido, en el Servicio de Organización, un sistema informatizado de Seguimiento de Expedientes y Acuerdos (SEA) que permite localizar la fase en que se encuentra la tramitación de los procedimientos iniciados en cualquier Servicio de la Corporación.

Se han encontrado debilidades en diversos puntos del control interno, que se especifican en los apartados correspondientes, pudiendo destacarse los siguientes:

- Aprobación de los expedientes de modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente al que corresponden.
- Contracción en los libros contables de derechos y obligaciones que no habían sido debidamente liquidados, practicándose las anotaciones por las estimaciones efectuadas.
- Falta de la firma del Ordenador de Pagos en diversos Mandamientos de Pago del ejercicio de 1990.
- Omisión del seguimiento de la tramitación de las cuentas justificativas de los Mandamientos de Pago "a justificar", hasta su aprobación por el órgano competente.
- Falta de control en las transacciones de los bienes inmuebles (parcelas y solares), que se realizan en urbanismo y en su coordinación con la Cuenta de la Administración del Patrimonio.
- Insuficiencias en el control de las relaciones del Ayuntamiento con la Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L., en las operaciones de venta de solares, especialmente en la venta de terrenos del paraje "Quinta Julieta", así como en el destino de las subvenciones concedidas.

2. GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

2.1. *Presupuestos*

Los Presupuestos se han tramitado de acuerdo con la normativa vigente en los tres años fiscalizados y han sido aprobados por el Pleno de la Corporación con ligeros retrasos sobre el plazo legal establecido.

Con el Presupuesto General de la Corporación se aprueban los Presupuestos de los Organismos Autónomos y los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de las Sociedades Mercantiles, elaborándose un Estado de Consolidación de los Presupuestos en cumplimiento de la normativa vigente.

En las Bases de ejecución de los Presupuestos se aprueban, anualmente, las normas para su gestión, debiendo señalarse las siguientes peculiaridades:

- En la Base 1.3 b), aprobada para el ejercicio de 1988, se autoriza la imputación al mismo de las obligaciones reconocidas hasta el 31 de enero y siguiente y en la Base número 1.3 b) de 1989 y 1990 se contempla, asimismo, el reconocimiento, durante todo el ejercicio, de las obligaciones del ejercicio anterior, con cargo a la partida habilitada para estos fines.

  En aplicación de estas normas, se han autorizado en los respectivos Presupuestos las siguientes partidas:

Año	Partida	Millones de pesetas
1988	259.112.01 HYE	100
1989	259.112.01 HYE	292
1990	240.432.00 HYE	243,1 (incluye un suplemento de crédito de 93.1 millones de pesetas)

  A estos créditos se aplican las obligaciones de ejercicios anteriores, que no pudieron reconocerse en su momento, por no ser conocidas por los órganos de control, o por no existir dotación presupuestaria suficiente o adecuada, previo su reconocimiento por el Pleno de la Corporación, en todos los casos.

  Mediante este sistema, se dispone, desde la aprobación del Presupuesto, de las dotaciones necesarias para aplicar estos gastos sin necesidad de habilitar, en cada caso, los créditos precisos y, en cualquier caso, por su pequeña cuantía, en relación con los Presupuestos aprobados, inferior al 0,7 por ciento de los mismos, no parece revestir especial significación.

Los Presupuestos iniciales se han aprobado nivelados en los tres ejercicios examinados, produciéndose déficits en los Presupuestos refundidos al incorporar las Resultas de ingresos y gastos y los remanentes de crédito del ejercicio anterior, como se detalla más adelante.

En relación con la estructura económica de los Presupuestos de 1988 y 1989, debe destacarse la inclusión, en el Capítulo 4º, "Transferencias corrientes" de

diversos conceptos que corresponden al Capítulo 2°, "Compra de bienes corrientes y de Servicios", como son las retribuciones del Agente Ejecutivo, los gastos del Servicio Público de transportes urbanos, y las aportaciones al Centro de Cooperación y Gestión tributaria. No se ha tenido en cuenta que, según la Orden de 14 de noviembre de 1979, las transferencias se definen por la inexistencia de contrapartidas por parte de los beneficiarios y, en estos casos, existe siempre una prestación a cambio.

Estos errores se han rectificado en el Presupuesto para 1990, en el que se aplica voluntaria y anticipadamente la estructura presupuestaria aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de setiembre de 1989, que no tiene carácter obligatorio hasta el ejercicio de 1992.

En el Presupuesto de 1990 se incluyen, por primera vez, ingresos por la aplicación de precios públicos, en los conceptos incluídos en los artículos 34 y 35 del Presupuesto de Ingresos, previa la aprobación de las Ordenanzas fiscales correspondientes.

Como anomalía debe señalarse que, en este ejercicio, los gastos corrientes y las amortizaciones de los préstamos previstos exceden a los ingresos corrientes, una vez deducidas las Contribuciones Especiales, en 1.885.105.000 pesetas, lo que supone destinar los recursos procedentes de operaciones de capital o financieras a estas finalidades, con infracción de lo dispuesto en los artículos 5 y 50, apartado 1, de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales.

2.2. *Modificaciones de los presupuestos*

Se han aprobado diversos expedientes de modificaciones de créditos en el período fiscalizado, por cuantías que van desde un 22 por ciento del Presupuesto inicial, en el ejercicio de 1988, a un 63 por ciento en 1989.

Estas modificaciones se han concretado, en más del 92 por ciento de su importe, en operaciones de reembolso de pasivos financieros, destinándose el 8 por ciento restante a cubrir los aumentos en los gastos originados por la actuación de los servicios.

Como anomalía debe señalarse la práctica habitual de tramitar expedientes de modificaciones de créditos una vez finalizado el ejercicio al que se refieren. Así, en el ejercicio de 1988, de los doce expedientes tramitados, cuatro han sido publicados en el Boletín Oficial y aprobados definitivamente en los meses de enero, febrero y marzo de 1989, cuando el Presupuesto se cerró el 31 de diciembre de 1988.

Esta misma anomalía se repite en 1989 con los dos últimos expedientes aprobados, y en el ejercicio de 1990, donde se han tramitado 38 expedientes de modificaciones de crédito y 7 de ellos se han publicado en el Boletín Oficial en el ejercicio siguiente; además, seis expedientes de transferencias de créditos se informaron, en 1991.

Estas modificaciones son irregulares por referirse a presupuestos liquidados y por ello, no vigentes en el momento de su aprobación definitiva.

Se ha hallado otra anomalía en los expedientes tramitados para los créditos ampliables para conceder anticipos al personal. El procedimiento seguido por la Corporación consiste en habilitar cada trimestre una partida de 75 millones de pesetas (300 millones anuales en 1990) evaluada como estimación cuando, de las Bases aprobadas y de la legislación vigente, estos créditos deben ampliarse en función de la "efectividad" de los recursos afectados. El sistema utilizado, que no está autorizado por la normativa vigente, puede sustituirse con ventaja aprobando con el Presupuesto la dotación anual de esta partida en lugar de tramitar, en cada trimestre, un expediente de ampliación de crédito por cuantía estimada y no cierta.

2.3. *Liquidación de los Presupuestos.*

La liquidación de los Presupuestos en el trienio fiscalizado se ha realizado de conformidad con las normas vigentes y ha sido aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno de la Corporación, por resultar déficits en los tres años como consecuencia de la incorporación de los remanentes de crédito del ejercicio anterior, según se detalla a continuación:

- En la liquidación del Presupuesto de 1988, aprobado por resolución de 24 de febrero de 1989, resulta un déficit de 45.536.994 pesetas que, según acuerdo del Pleno de 16 de marzo de 1989, tendrá que ser compensado en el Presupuesto de 1990, que deberá aprobarse con un superávit de cuantía no inferior al citado déficit.

- El Presupuesto de 1990, se aprueba nivelado en 42.937.631.000 pesetas, pero se incluye en el mismo una partida, con aplicación presupuestaria 226.121.92 "Otros gastos diversos", por 45.537.000 pesetas, para cancelar el déficit existente en la liquidación del presupuesto de 1988, medida que, aunque no cumple con las normas vigentes, ni con el acuerdo del Pleno citado, produce el mismo resultado nivelador.

- En la liquidación del Presupuesto de 1989, resulta inicialmente un superávit de 23.697.513.765 pesetas, pero, según la liquidación definitiva, aprobada por resolución de la Alcaldía de 16 de marzo de 1990, este Presupuesto "arroja un déficit de 73.834.646 pesetas, debiendo aprobarse el Presupuesto para 1991 con un superávit inicial de cuantía no inferior", según acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 1990.

El Presupuesto de 1991 ha sido aprobado con un superávit inicial de 28.300.000 pesetas, inferior a la cantidad antes señalada.

La transformación del resultado presupuestario, de superávit en déficit, se produce por la incorporación de remanentes de crédito en el Presupuesto de 1990, según el siguiente detalle:

Incorporación de remanentes de crédito	Pesetas
Por gastos comprometidos	13.178.778-.436
Por gastos no comprometidos	10.592.569-.975
Suma	23.771.348-.411
Superávit de ejecución	23.697.513-.765
Déficit	(73.834.646)

- El mismo supuesto se repite en el ejercicio de 1990. La liquidación del Presupuesto tiene un superávit de 24.720.628.227 pesetas y al incorporar los remanentes de crédito al Presupuesto de 1991 por 24.769.028.797 pesetas, resulta un déficit de 48.400.570 pesetas, que se ha absorbido al aprobar el Presupuesto para 1992 con un superávit inicial de 48.401.000 pesetas (Acuerdo del Pleno de 25 de setiembre de 1991).

El grado de ejecución de los Presupuestos en este período (derechos contraídos sobre presupuestados) es, en ingresos, del 96 al 97 por ciento, siendo el grado de realización del contraído del 71 al 79 por ciento (relación entre derechos recaudados y derechos liquidados).

Los ingresos tributarios tienen un grado de ejecución muy alto, 105 por ciento, en 1988 y 1989, bajando en 1990 hasta el 96 por ciento, por la incidencia de las bajas practicadas en las liquidaciones en impuestos indirectos y tasas. Sin embargo, el bajo nivel de realización de los derechos contraídos da lugar a unas relaciones de deudores crecientes a lo largo del trienio que pasan de 9.531 millones de pesetas, en 1988, a 22.722 millones de pesetas, en 1990, produciéndose un incremento del 238 por ciento.

En gastos, el grado de ejecución baja del 96 por ciento en 1988, al 66 por ciento en los dos ejercicios siguientes, siendo el grado de realización del contraído del 69 por ciento en 1988, del 97 por ciento en 1989 y del 95 por ciento en 1990.

Las obligaciones pendientes de pago pasan de 13.585 millones de pesetas en 1988, a sólo 2.912 millones de pesetas en 1990, (el 21 por ciento de la del año anterior), aunque esta relación no es significativa, por la aplicación de distintos criterios contables en el ejercicio de 1990, en el registro de los contraídos de créditos y las obligaciones reconocidas.

En las Resultas de ingresos, derechos pendientes de cobro, puede destacarse que en 1990, la partida más importante, 30 por ciento del total, correspondía a Resultas de ejercicios anterioros, y seguida, con un 26 por ciento, por los préstamos concertados pendientes de disposición y por el pendiente de cobro de ingresos tributarios, con un 25 por ciento.

En las Resultas de gastos de 1990, la partida más importante, 32 por ciento del total, corresponde al pendiente de pago por la compra de bienes y servicios, seguida por las inversiones reales (31 por ciento) y las Resultas de ejercicios anteriores (29 por ciento).

Para completar el análisis de las liquidaciones presupuestarias, debe señalarse la importancia de la incorporación de los remanentes de crédito del ejercicio anterior, que ha tenido la siguiente evolución en el período:

Años	Millones de Pesetas
1988	542
1989	23.771
1990	24.769

Interesa señalar que el Ayuntamiento incorpora estos créditos al ejercicio correspondiente, dándole el tratamiento contable de las Resultas de gastos, sin tener en cuenta que esta incorporación de crédito sólo se puede aplicar una vez en el ejercicio siguiente al que se refiere el gasto, y que, una vez liquidado ese ejercicio, deben ser anulados sin que puedan incorporarse, por segunda vez, al ejercicio siguiente, incorporación que sí es posible en las Resultas de gastos, hasta su extinción, por referirse a obligaciones reconocidas pendientes de pago. [1]

2.4. *Gestión contable y cuentas rendidas*

La gestión contable se realiza de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad de Gastos del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada por el Pleno el 30 de diciembre de 1986, que se aplica en su totalidad, y la Instrucción de Gestión y Contabilidad de Ingresos, aprobada el 27 de julio de 1988, aplicada todavía de forma parcial, pendiente de completar en diversos procesos de informatización.

El Servicio de Contabilidad es una unidad dependiente de la Intervención General y lleva desde 1990 todos los libros obligatorios de forma informatizada, con la omisión de algunos requisitos formales de firmas, excepto el libro de Inventarios y Balances, que no se lleva, y el libro de Arqueos, que se lleva en la Tesorería.

La contabilidad distingue entre las distintas fases de los procesos presupuestarios, derechos liquidados y recaudados en ingresos, y de autorización, disposición, obligación, ordenación de pagos y pagos, en gastos, y formando, a partir de 1990, los libros contables con los registros informáticos encuadernados, todo ello de acuerdo con las instrucciones aprobadas en el Sistema Integral de Contabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza (SICAZ). Sin embargo, se ha observado el frecuente incumplimiento de estas normas y en los libros General de Gastos y de Rentas y Exacciones, se contraen créditos por derechos y obligaciones que no están todavía liquidados, realizando estimaciones de los mismos, lo que obliga a efectuar numerosas anulaciones en la liquidación del Presupuesto.

Nota 1. En el anexo número 1 del presente informe, se incluyen unos estados de las liquidaciones de los Presupuestos que contienen los presupuestos preventivos y refundidos iniciales, las modificaciones de crédito, los presupuestos refundidos definitivos, los derechos y obligaciones contraídos, su estructura, grados de ejecución de los presupuestos, ingresos y pagos realizados y grado de realización de los derechos liquidados y de las obligaciones reconocidas, clasificado todo ello de acuerdo con su naturaleza económica.

Se han rendido las cuentas obligatorias, General de Presupuestos, Administración del Patrimonio, Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto y Tesorería, que han sido tramitadas en la forma determinada en la normativa vigente y aprobadas por el Pleno de la Corporación, en general, con retrasos sensibles sobre los plazos legales establecidos. Se han aprobado fuera de plazo las Cuentas siguientes:

1988 - Cuenta de la Administración del Patrimonio (Pleno de 29 de juniq de 1990).

1989 - Cuenta General del Presupuesto (Pleno de 29 de noviembre de 1990).
- Cuenta de la Administración del Patrimonio (Pleno del 24 de abril de 1991).

1990 - Cuenta General del Presupuesto (Pleno del 27 de febrero de 1992).
- Cuenta de la Administración del Patrimonio (Pleno de 28 de noviembre de 1991).

Se han aprobado las Liquidaciones de los Presupuestos por el Presidente de la Corporación y se ha procedido a la incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio siguiente.

Las Liquidaciones de los Presupuestos aprobados reflejan la situación de la gestión presupuestaria, de acuerdo con los principios contables establecidos, con las salvedades siguientes:

- La contracción de los derechos liquidados por venta de solares, tanto de parcelas sobrantes como de actividades urbanísticas, se realiza antes de su adjudicación, lo que origina un elevado porcentaje de bajas en estos conceptos cuando las subastas quedan desiertas (en 1990, 788 millones de pesetas, esto es, un 26 por ciento del total contraído).

- Los derechos contraídos en ingresos en el Impuesto sobre solares, figuran por una cuantía estimada, significativamente menor que los Padrones aprobados por el Organo municipal correspondiente.

- En las Resultas de Ingresos se aprueban anulaciones debidas a rectificaciones por exceso de contraído por los importes siguientes:

Años	Millones de Pesetas	Porcentaje s/total Derechos %
1988	1.651,5	3,7
1989	1.244,1	1,6
1990	1.263,5	1,6

Estas anulaciones corrigen las desviaciones de los cargos contabilizados y reflejados en las liquidaciones, con los derechos liquidados reales.

- En las Resultas de Gastos se aprueban anulaciones por rectificaciones, por exceso de contraído, por los importes siguientes:

Años	Millones de Pesetas	Porcentaje s/total Obligaciones %
1988	729,5	1,6
1989	983,9	1,9
1990	887,1	1,7

Estas anulaciones rectifican las desviaciones de los contraídos contabilizados y recogidos en las liquidaciones, con las obligaciones reconocidas reales.

- Se contabilizan en VIAP. ingresos que tienen la condición de operaciones presupuestarias, por las siguientes cuantías.

Años	Pesetas
1988	134.829.909
1989	188.542.568
1990	153.434.853

- El importe de los valores, recibos o certificaciones de crédito, excluido el Impuesto sobre solares, pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1990, según las Cuentas de Recaudación aprobadas, supera el pendiente de cobro reflejado en la liquidación del Presupuesto por los mismos conceptos, en 1.893.356.573 pesetas, según el siguiente detalle:

	Pesetas
Pendiente de cobro s/ctas. Recaudación	11.109.555-.860
Pendiente de cobro s/liquidación Presupuesto	9.216.199-.287
Diferencia	1.893.356-.573

En el pendiente de cobro de las Cuentas de Recaudación no se incluyen los Valores en suspenso, consignados en Tesorería para su anulación o estudio, que ascienden a 2.744.496.140 pesetas el 31 de diciembre de 1990.

- En la liquidación del ejercicio de 1990 figuran, indebidamente, derechos contraídos en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, por importe de 681.610.120 pesetas, que no tenían soporte legal suficiente, por lo que han sido anuladas en el ejercicio siguiente.

La Cuenta de Administración del Patrimonio refleja la situación patrimonial de la Corporación, de acuerdo con los principios contables aprobados, con las siguientes salvedades:

- Los saldos iniciales del Pasivo en los años 1989 y 1990 no coinciden con los saldos finales del ejercicio anterior, por cuantías no significativas.

- No se incluyen en el Activo los bienes culturales y artísticos incluidos en el Catálogo de Bienes Culturales del Ayuntamiento, editado en 1983.

- En la situación del Pasivo al 31 de diciembre de 1990, deben incluirse dos partidas, una de 1.509.359.857 pesetas, importe de la deuda pendiente de amortizar con el Tesoro Público, por la devolución de la Contribución Territorial Urbana, Rústica y Pecuaria, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de febrero de 1987 (Real Decreto Ley número 1/1987 de 10 de abril de 1987), y otra, estimada, de 213.498.875 pesetas, por el pago del precio aplazado de las viviendas del Casco Histórico compradas a la Diputación General de Aragón.

Las Cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto recogen el movimiento de los ingresos y pagos por conceptos extrapresupuestarios con las salvedades siguientes:

- Se contabilizan en estas cuentas operaciones que tienen la condición de presupuestarias, aunque tienen escasa incidencia en el volumen total de ingresos:

Años	Pesetas	Porcentajes s/ ingresos totales VIAP. %
1988	134.829.909	0,4
1989	188.542.568	0,6
1990	153.434.853	0,3

Las Cuentas de Tesorería contabilizan el movimiento del metálico y valores de la Corporación, tanto de carácter presupuestario como extrapresupuestario, y reflejan la situación de la Tesorería Municipal de acuerdo con los principios contables establecidos.

2.5. *Análisis de los Mandamientos de Pago en firme y a justificar*

Mandamientos de Pago "en firme"

Se ha analizado una muestra seleccionada aleatoriamente de 715 Mandamientos de Pago en firme de los ejercicios fiscalizados, que representan el 1,3 por ciento del colectivo, con el siguiente detalle:

Años	Número M/P examinados	Porcentajes S/M.P.
1988	187	1,13
1989	247	1,33
1990	281	1,40
Suma	715	1,29

Del examen de la muestra, resultan las anomalías siguientes, que se expresan en porcentaje sobre la muestra analizada:

- Se han realizado pagos antes de ser ordenados:

Años	Porcentaje
1988	3,20
1989	1,21
1990	1,07

- Se han realizado pagos antes de haberse autorizado el gasto:

Años	Porcentaje
1988	2,67
1989	1,21

- No consta la fecha de ordenación del gasto en los Mandamientos de Pago:

Años	Porcentaje
1988	20,32
1989	19,30
1990	7,11

- Falta la firma del Ordenador de Pagos en 136 Mandamientos de Pago del ejercicio de 1990, lo que supone el 48,4 por ciento de la muestra y corresponden a pagos realizados por transferencias bancarias.

- Falta la firma del Interventor en dos Mandamientos de Pago del ejercicio de 1989.

- Falta el D.N.I. del perceptor en 21 Mandamientos de Pago del ejercicio de 1990 (7,47 por ciento de la muestra).

- Faltan los documentos justificativos del gasto en 3 Mandamientos de Pago de 1989 y en otros 3, no son originales.

- La aplicación presupuestaria no es correcta:

Años	Porcentaje
1988	5,88
1989	---
1990	0,71

La frecuencia de las anomalías señaladas no parece significativa a efectos de la evaluación del control interno, dado el volumen de Mandamientos de la muestra, con la única excepción de la omisión de la firma del Ordenador de Pagos en el 48,4 por ciento de los Mandamientos examinados del ejercicio de 1990, que refleja una debilidad importante en el control de dicho trámite.

Mandamientos de Pago "a justificar"

Esta clase de Mandamientos estaba regulada, en el trienio analizado, por las Bases de ejecución de los Presupuestos y, específicamente, por el Decreto de la Alcaldía de 20 de marzo de 1986, que establece un procedimiento singular, modificado en 1992.

Según este Decreto, los Mandamientos de Pago "a justificar" se libran a favor del Depositario, excepto los gastos de viaje, representación, Casa de Amparo y Casa de Socorro. Los gastos los realizan los responsables de los Servicios, que remiten a la Tesorería las facturas conformadas para su pago. La Tesorería las paga y presenta la cuenta justificativa, que, una vez fiscalizada por la Intervención, pasa al dictamen de la Comisión de Hacienda para su aprobación posterior por la Comisión Municipal de Gobierno.

Este sistema crea una Tesorería paralela, sin fiscalización previa, que parece haber funcionado bien hasta 1992, año en que se mantiene con carácter parcial, actuando la Tesorería como tenedor transitorio de los fondos a disposición del perceptor.

La ventaja del procedimiento es la centralización de la gestión de los fondos, que permite su rentabilización en favor de la Corporación, así como facilitar la retenciones fiscales y la rendición de las cuentas.

El inconveniente es la falta de control y el aumento de riesgo que supone poner en una sola mano, sin fiscalizar, recursos financieros que pueden llegar a más de 400 millones de pesetas.

En Tesorería se lleva el control con un libro Registro de Mandamientos de Pago a justificar, un Libro Mayor para registro de los movimientos y otro Libro de Movimientos de Tesorería, todos ellos diligenciados por el Tesorero con el visto bueno del Alcalde.

En nuestra opinión la aplicación del sistema de anticipos de Caja Fija es una alternativa recomendable para reducir el riesgo señalado, siempre que no haya un único perceptor de estos anticipos.

Se ha efectuado un muestreo de criterio, seleccionando 37 Mandamientos de Pago a justificar (2,92 por ciento del colectivo) con el siguiente detalle:

Años	Número M/P examinados	Porcentajes s/total
1988	12	2,88
1989	15	2,92
1990	10	2,98
Suma	37	2,92

No se han podido fiscalizar, por no haber sido entregados, los siguientes Mandamientos:

	Mandamientos de Pago	Pesetas
1988	1.381 - Fiestas tradicionales	25.000.000
	5.749 - Gastos representación	3.000.000
1989	8.705 - Programa Verano	18.000.000
	12.363 - Fiestas Pilar 89	143.000.000
1990	750 - Fiestas Patronales	31.000.000
	6.162 - Fiestas Primavera 90	32.000.000
	12.111 - Fiestas Pilar	143.000.000

Estos Mandamientos representan el 19 por ciento del colectivo seleccionado y, aún cuando las Cuentas que no han sido aprobadas, han sido rendidas por los cuentadantes, no se han entregado al equipo de fiscalización por estar pendientes de solventar los reparos puestos por la Intervención General a las cuentas rendidas.

En los Mandamientos de Pago a justificar examinados, se han encontrado las siguientes anomalías.

1988

- El 50 por ciento de los Mandamientos han sido justificados fuera del plazo legal establecido, y algunos con más de tres años de retraso.

- Las cuentas justificativas del Mandamiento de Pago 12.035 "Fiestas del Pilar", por 15.000.000 pesetas, han sido aprobadas conjuntamente con las del Mandamiento de Pago número 7.515 "Fiestas del Pilar", de 95.000.000 pesetas, pero el acuerdo de aprobación de 15 de diciembre de 1992 se refiere únicamente a este último, omitiendo toda referencia al primero.

- El libramiento 13.156, por 3.000.000 pesetas, no ha sido aprobado todavía, aunque la cuenta justificativa ha sido rendida en 1992 con documentos justificativos, también de ese año.

1989

- El 70 por ciento de los Mandamientos han sido justificados fuera del plazo legal establecido.

- No consta que hayan sido aprobadas por la Comisión de Gobierno las cuentas justificativas del libramiento número 5.511, de 32.000.000 pesetas.

1990

- El 86 por ciento de los Mandamientos examinados han rendido sus cuentas justificativas fuera del plazo legal establecido.

Las cuentas justificativas de las Fiestas del Pilar de los años 1989 y 1990, por 143 millones de pesetas cada una, no han podido ser examinadas en el curso de la fiscalización, y no habían sido aprobadas por la Comisión de Gobierno, no obstante haber pasado más de tres años, en el primer caso, y dos en el segundo, desde su pago.

3. GESTION FINANCIERA

3.1. *Análisis de los ingresos*

Los derechos liquidados en el período, una vez depuradas las operaciones de tesorería y la reconversión de deuda realizada en el ejercicio de 1989, aumentan en un 41,5 por ciento de 1988 a 1990. Las partidas más destacadas de este incremento son las siguientes:

	Millones de pesetas				%
	1988	1989	1990	Totales	90/88
Transferencias corrientes	6.409,3	8.689,0	9.319,0	24.417,3	45
Enajenación inversiones reales	46,6	1.381,2	3.023,86	4.451,6	6.388
Transferencias de capital	----	380	964,20	1.344,2	---
Operaciones de crédito	7.184,7	10.200	12.142,84	29.527,5	69
Totales	13.640,6	20.650,2	25.449,9	59.740,6	

Estos ingresos representan el 52 por ciento de los ingresos totales (115.535,30 millones de pesetas) y sumados los ingresos tributarios o por prestación de servicios, que ascienden a 54.628,90 millones de pesetas (47 por ciento del total), alcanzan el 99 por ciento de los mismos.

La gestión de ingresos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de gestión y contabilidad de ingresos, aprobada por el Pleno de la Corporación el 27 de julio de 1988.

Estos ingresos pueden ser de contraído previo (padrones, ingresos cuasi-directos, participación en tributos del Estado) o de contraído simultáneo (ingresos directos y otras participaciones).

Los ingresos tributarios se basan en los padrones elaborados por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria para los impuestos inmobiliarios y las licencias fiscales, por la Dirección General de Tráfico para el Impuesto sobre circulación de vehículos y por los propios Servicios municipales en los restantes casos, siendo las figuras impositivas más destacadas, por el volumen de recaudación, las siguientes:

	Millones de pesetas			
	1988	1989	1990	Suma
Contribución T. Urbana	4.420,1	3.754,1	4.190,3	12.364,5
Impuesto Incremento valor terrenos	2.056,3	3.285,0	2.547,0	7.888,3
Licencia fiscal e industrial	1.415,5	1.684,2	1.781,4	4.881,1
Circulación vehículos	1.065,5	1.148,6	1.415,9	3.630
Impuesto s/ solares	1.051,5	632,5	----	1.684
Impuesto s/ radicación	851,0	939,4	934,4	2.724,8
Sumas	10.859,9	11.443,8	10.869	33.172,7

Por prestación de servicios las figuras más importantes son:

	1988	1989	1990	Suma
Abastecimiento agua	1.728,1	1.898,5	2.191,2	5.817,8
Recogida de basura	1.231,0	610,1	728,8	2.569,9
Sumas	2.959,1	2.508,6	2.920	8.387,7

Las partidas anteriores suponen el 76 por ciento de los ingresos tributarios y se gestionan directamente, junto con las restantes tasas y precios públicos, por los servicios municipales.

La recaudación se realiza en período voluntario por la Tesorería Municipal y en período ejecutivo por la Recaudación Ejecutiva Municipal contratada desde el año 1976.

En la gestión de los ingresos se han encontrado anomalías en los impuestos sobre solares y de incremento del valor de los terrenos, con unas anulaciones de contraídos de 1.331 millones de pesetas y 1.184 millones de pesetas respectivamente, según se detalla a continuación:

Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos

Según los datos de la Contabilidad Municipal:

1) En 1988 se liquidaron 2.056.330.082 pesetas, de las que se recaudaron, 1.340.036.153 pesetas en 1988 y 380.580.985 pesetas en 1989, anulándose, en 1989, liquidaciones por 335.712.944 pesetas.

La recaudación líquida obtenida supone el 84 por ciento de los derechos liquidados, porcentaje que parece aceptable.

2) En 1989, año en el que se elevan sustancialmente las tarifas de este impuesto, se liquidan 3.285.034.569 pesetas, de las que se recaudan, 1.324.034.055 pesetas en 1989, 150.079.470 pesetas en 1990 y 356.832.407 en 1991, y se anulan 323.207.727 pesetas en 1990 y 524.598.967 pesetas en 1991, quedado pendiente de cobro la cantidad de 606.281.943 pesetas.

La recaudación líquida no llega al 56 por ciento de los derechos liquidados, sufriendo una baja sensible sobre el año anterior.

3) En 1990, los derechos liquidados ascendieron a 2.547.028.448 pesetas de las que se recaudan, 1.067.266.795 pesetas en 1.988, 793.160.573 pesetas en 1.989 y están pendiente de cobro 686.601.080 pesetas.

La recaudación líquida al 31 de diciembre asciende al 73 por ciento de los derechos liquidados recuperándose de la baja del año 1989.

En la gestión del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, donde se registran anualmente más de 17.000 declaraciones de transmisión de dominio, se pueden señalar las siguientes peculiaridades:

- La Tasa de equivalencia, que debía liquidarse el 31 de diciembre de 1989, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta de la Ley 39/88, se ha liquidado en 1991, debido a la indefinición de la norma citada, sobre si esta tasa debe tener la consideración de impuesto a cuenta del nuevo Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana, regulado en los artículos 105 a 111 de la citada Ley 39/88.

- El volumen de la anulaciones practicadas en las liquidaciones de este impuesto es elevado, debido principalmente a las causas siguientes:

  - Práctica defectuosa de las notificaciones.
  - Problemas de delimitación de las superficies transmitidas.
  - Retrasos en las aportaciones de la documentación requerida.
  - Errores en los cálculos de la base imponible o del tipo aplicable.

El procedimiento seguido por la Corporación consiste en anular las liquidaciones defectuosas y practicar nuevas liquidaciones, dando traslado al interesado y a las Unidades de Contabilidad y Recaudación. Este sistema produce un elevado número de bajas en contabilidad, al duplicarse las liquidaciones iniciales y revisadas.

Impuesto sobre Solares

1) En 1988 se contraen derechos por 1.051.481.173 pesetas, de los que se ingresan, 180.692.369 pesetas en 1988 y 127.148.953 en 1989 pesetas y se anulan 8.101.192 pesetas en 1989 y 555.966.455 pesetas en 1990, figurando pendiente de recaudar al 31 de diciembre de 1990, 179.572.204 pesetas.

2) En 1989 se contraen 632.511.717 pesetas, de las que se recaudan, 2.756.666 pesetas en 1989, 42.028.937 pesetas en 1990 y figurando pendiente de recaudar al 31 de diciembre de 1990, 587.726.114 pesetas.

En 1991 se incluyen en una única partida presupuestaria los derechos pendientes de recaudar de 1988 y 1989, que suman 767.298.318 pesetas, de las que se recaudan 596.679 pesetas, anulándose las 766.701.639 pesetas restantes.

Este impuesto, establecido en el año 1979, no se aplicó hasta 1983, por no haberse redactado el Registro Municipal de Solares. Basados en este Registro se aprueban posteriormente los Padrones de los años 1980 hasta 1989, último de vigencia de este impuesto, que desaparece en 1990 al quedar integrado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Al poner al cobro este impuesto, en 1984, se interponen numerosos recursos, primero administrativos y posteriormente contenciosos, que devienen en una serie de sentencias del Tribunal Supremo, confirmando las de la Audiencia de Zaragoza, en el sentido de que debe elaborarse un Registro "anual" de solares y que, una vez aprobado, puede procederse a la exacción del impuesto y recordando, asimismo, que dada la finalidad no financiera de este impuesto, no procede su devengo con efectos retroactivos. La aplicación de los criterios establecidos en estas Sentencias podría llevar a la anulación de todos los Padrones aprobados por la Corporación.

En el período fiscalizado los padrones aprobados, que, según manifiesta la Corporación, no han sido puestos al cobro, ascienden a las siguientes cantidades:

Años	Pesetas
1988	1.676.719.031
1989	1.581.279.292

El contraído en los libros de Rentas y Exacciones de estos años se ha realizado por cuantías menores, desconociéndose los motivos de la reducción. Estos padrones no han sido puestos al cobro ni providenciados de apremio y se encuentran en suspenso. Los valores pendientes de cobro han sido anulados en la liquidación del ejercicio de 1991, aunque en Recaudación existen todavía, al 31 de diciembre de 1991, valores al cobro en situación de suspenso.

Limitándonos a los últimos cinco años, las cantidades cobradas por este impuesto ascienden a 353.223.604 pesetas.

Con fecha 7 de febrero de 1990, se ha entregado a la Tesorería municipal, para su cobro, el Cargo número 47, por importe de 1.210.569.056 pesetas, correspondiente a valores pendientes de cobro de los ejercicios de 1987/88/89, que no fueron puestos al cobro en su momento. Estos valores tienen suspendido el procedimiento recaudatorio y están pendientes de una resolución definitiva, que deberá aprobar la Corporación.

3.2. *Análisis de los gastos*

Las obligaciones reconocidas y liquidadas en el período fiscalizado, una vez deducidas las operaciones de tesorería y la operación de crédito concertada en 1989 para la reconversión de préstamos, pasan de 28.404,4 millones de pesetas en 1988, a 33.038,6 millones de pesetas en 1990, lo que supone un incremento del 16 por ciento de los gastos en el trienio, que puede considerarse normal.

Las partidas que han tenido un aumento significativo en el trienio son las siguientes:

	1988	1989	1990	Totales	% Δ 90/88
Transferencias de capital	356,1	439,2	731,1	1.526,4	105
Amortización préstamos	988,5	1.282,2	1.951,3	4.222,0	97
Intereses préstamos	2.138,0	2.643,8	3.847,6	8.629,4	80
Totales	3.482,6	4.365,2	6.530,0	14.377,8	88

Estos gastos representan tan solo el 16 por ciento del total de gastos del período, siendo las partidas de gastos más importantes, que alcanzan un 83 por ciento del total, las que han tenido aumentos menos significativos, e incluso reducciones en valor absoluto, como se observa en las cifras siguientes:

	1988	1989	1990	Totales	% Δ 90/88
Personal	9.697,2	10.154,3	11.604,0	31.455,5	19
Bienes y servicios	6.614,8	6.144,3	8.305,2	21.064,3	26
Transferencias corrientes	1.473,3	1.847,7	1.392,0	4.713,0	(5)
Inversiones Reales	6.963,6	4.715,7	4.900,8	16.580,1	(29)
Totales	24.748,9	22.862,0	26.202,0	73.812,9	6

Se analizan a continuación los gastos de Personal, Bienes y Servicios e Inversiones reales, que suponen el 78 por ciento de los gastos totales. Las rúbricas restantes se consideran en otros apartados del informe.

Personal

Este capítulo es el de mayor importancia cuantitativa y representa entre el 34 y el 37 por ciento del total de los gastos realizados en cada ejercicio, con aumentos del 5 por ciento en 1989 y del 14 por ciento en 1990, que se consideran normales, teniendo en cuenta el aumento de 342 puestos de trabajo que se incorporan en el año 1990, prioritariamente para cubrir la plantilla de la Gerencia de Urbanismo.

La plantilla de personal de la Corporación ha evolucionado en la forma siguiente:

Situación al 31 de diciembre de cada año				Variación % Δ
	1988	1989	1990	90/88
Personal funcionario	2.883	2.880	2.942	2
Personal laboral fijo	1.137	1.207	1.370	20
Personal laboral temporal	165	165	281	70
Personal eventual	21	21	22	5
Suma	4.206	4.273	4.615	10

La relación de puestos de trabajo se aprueba cada año por el Pleno de la Corporación, tanto para el personal funcionario como laboral, publicándose la oferta pública de empleo para cubrir las plazas vacantes por concurso u oposición.

El régimen retributivo es el establecido en la normativa vigente y las nóminas se confeccionan y pagan por la Habilitación de Personal, dependiente de la Tesorería, en función de las instrucciones recibidas del Servicio de Personal (altas, bajas, modificaciones, etc..) practicándose las retenciones fiscales y sociales establecidas, que se ingresan con regularidad.

Como excepción debe señalarse que se han producido recargos en la liquidación de las cuotas de la Seguridad Social por anomalías, omisiones y retrasos en la presentación de los partes de altas y bajas, por importe de 1.424.218 pesetas, según el siguiente detalle:

Año	Pesetas
1988	344.603
1989	347.738
1990	731.877
Suma	1.424.218

El Registro de Personal establecido en la Ley 30/1984 no se ha constituído todavía en el Ayuntamiento, que tiene en funcionamiento un sistema integrado e informatizado de gestión de personal que, aún cuando no reúne los requisitos formales del Registro administrativo, cumple con las necesidades funcionales de la Corporación.

Existe un Convenio colectivo suscrito por la Corporación con el personal laboral y un Pacto con el personal administrativo, que establecen condiciones similares, tanto de trabajo como de retribuciones, para los dos colectivos.

Compra de bienes corrientes y servicios

Esta partida ocupa el segundo lugar por el volumen de gasto, alcanzando el 24 por ciento del total del trienio y porcentajes similares todos los años.

En 1990, los gastos de este capítulo aumentan un 26 por ciento sobre los de 1988, debido a los ajustes presupuestarios realizados en una serie de partidas que, en los años 1988 y 1989, se habían contabilizado indebidamente como subvenciones. Ocurre así con los gastos de la recaudación ejecutiva, y servicios de transportes urbanos entre otros.

Para facilitar la gestión presupuestaria en el ejercicio de 1990, por Decreto de la Alcaldía de 23 de enero, se agregan presupuestariamente una serie de partidas incluídas en los conceptos de arrendamientos, seguros, combustible y energía, que obligan, sin embargo, a llevar una contabilidad auxiliar para conocer la naturaleza económica del gasto realizado.

Las adquisiciones se realizan por los distintos Servicios en el caso de suministros menores no inventariables, de forma directa con fiscalización ulterior, hasta 500.000 pesetas, y por los Servicios de Patrimonio y Contratación o Gerencia Municipal de Urbanismo, por contratación directa hasta 2.500.000 pesetas, previa consulta a tres empresas.

Las restantes adquisiciones de suministros se realizan de forma centralizada en el Servicio citado, que formaliza todas las compras de material y mobiliario de oficina, así como de equipos informáticos, siguiendo la tramitación establecida en la normativa vigente.

Todas las adquisiciones de bienes inventariables se comunican a la Sección de Inventario para su inclusión en el Inventario de bienes de la Corporación.

Inversiones reales

Esta rúbrica es la tercera por su importancia cuantitativa en el período considerado y alcanza el 19 por ciento de gasto total, oscilando del 15 por ciento al 24 por ciento, según los ejercicios, siendo los conceptos más significativos los destinados a infraestructuras y equipamientos urbanos, ocupando el último lugar la adquisición de suelo, concepto en el que se ha invertido 2.156 millones de pesetas en el trienio 1988/90.

Los gastos con cargo a este Capítulo se realizan normalmente previa la tramitación de los correspondientes expedientes de contratación (que se analizan en otro apartado del informe), debiendo señalarse que el Ayuntamiento no lleva el Libro Auxiliar de Obras y Servicios, previsto en la regla 64.5 de la Instrucción de Contabilidad de Corporaciones Locales de 1952, para registrar, en cada obra, las condiciones económicas, gasto total, obligaciones reconocidas y liquidadas y mandamientos de pago expedidos. Estos gastos se controlan informáticamente en el sistema general de retenciones de crédito, sistema que no permite conocer de forma actualizada la información relativa a otros ejercicios, ni la forma de financiación, aportaciones de terceros, etc., de gran relevancia para el control de los recursos afectados a inversiones específicas.

El porcentaje mayor de gasto se realiza a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es también, junto con el Servicio de Patrimonio y Contratación, el órgano que realiza la mayor parte de la contratación municipal de obras y servicios.

Se debe destacar el bajo nivel de realización efectiva de los créditos para obras, con una media en el período del 50 por ciento de los créditos presupuestados. La evolución de los créditos presupuestados y las obligaciones reconocidas, por este concepto, ha sido la siguiente:

Millones de pesetas			
Año	Créditos presupuestados (1)	Obligaciones reconocidas (2)	Relación en % (2/1)
1988	7.349,0	6.963,6	95
1989	13.151,6	4.715,9	36
1990	13.011,3	4.900,8	38
Sumas	33.511,9	16.580,3	49

Otro punto de interés, es la evolución de la relación entre el gasto en Inversiones reales y el total de gastos, que ha ido decreciendo a lo largo del período, desde 25 por ciento del total, en 1988, al 15 por ciento, en 1990.

Millones de pesetas			
	Obligaciones reconocidas		
Año	En Inversiones reales (1)	Totales (2)	Relación Inversiones/Gasto total (1/2) en %
1988	6.963,6	28.404,4	25
1989	4.715,9	27.539,7	17
1990	4.900,8	33.038,6	15
Sumas	16.580,3	88.982,7	19

Indicadores significativos

Como indicadores significativos se han seleccionado los señalados para Operaciones de capital en la Orden Ministerial de 20 de setiembre de 1989, que aprueba la nueva estructura presupuestaria de las Corporaciones Locales:

La formación bruta de capital ha tenido una evolución marcadamente decreciente, debido a que las inversiones reales se financian cada vez más, con el producto de la enajenación de bienes inmuebles:

FORMACION BRUTA DE CAPITAL	
Año	Pesetas
1988	6.916.986.360
1989	3.334.468.589
1990	1.876.922.458
Suma	12.128.377.407

El saldo neto de transferencias de capital, que refleja la diferencia entre los Capítulos 7 de Ingresos y Gastos, ha sido el siguiente:

Año	Pesetas
1988	(356.100.000)
1989	(59.173.897)
1990	233.099.256
Suma	(182.174.641)

El saldo global ha sido negativo y tan sólo en 1990 se han recibido más transferencias de las concedidas.

Las variaciones netas de activos financieros, diferencia entre los Capítulos 8º de Gastos e Ingresos, han sido las siguientes:

Año	Pesetas
1988	(3.050.000)
1989	(2.500.000)
1990	17.500.000
Suma	11.950.000

Por último, las variaciones netas de pasivos financieros, que reflejan las operaciones netas de crédito o tesorería, han tenido un importante aumento en el período. Representan el incremento interanual del endeudamiento de la Corporación.

Año	Pesetas
1988	6.196.205.441
1989	19.604.270.194
1990	19.571.493.946
Suma	45.371.969.581

3.3. *Estudio de la Tesorería y la Recaudación*

3.3.1. *Tesorería*

La gestión de los fondos, valores y efectos municipales se realiza por la Tesorería, que recibe todos los ingresos y realiza todos los pagos, excepto los relativos a los Organismos Autónomos y Sociedades mercantiles, que tienen autonomía financiera.

La Tesorería elabora un plan anual de disposición de fondos y un estado mensual de previsión de ingresos y pagos, que determinan las prioridades en la realización de los pagos y la necesidad de concertar operaciones de tesorería para cubrir déficits temporales de liquidez, derivados de las diferencias de vencimiento en sus pagos e ingresos. Estas operaciones de tesorería han registrado un volumen creciente en el trienio analizado, pasando de 6.000 millones de pesetas, en 1988, a 9.380 millones de pesetas en 1990, con un 56 por ciento de incremento. Asimismo, los intereses satisfechos por este concepto han pasado de 398.815.-825 pesetas, en 1988, a 940.103.546 pesetas en 1990 (136 por ciento de aumento).

Las operaciones de tesorería se conciertan a un coste variable del MIBOR (Madrid interbanking offered rate), más un porcentaje, o a un interés fijo, sistemas que se consideran normales para este tipo de operaciones.

La permanencia de los déficits de tesorería puede aconsejar, entre otras medidas, la ampliación de las posibilidades de efectuar operaiones de préstamo recíprocas entre los Entes municipales, ya que, al tiempo que el Ayuntamiento tiene necesidad de concertar estas operaciones de tesorería, la Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L., con capital cien por cien propiedad del Ayuntamiento, mantiene en los ejercicios de 1988 y 1989 una tesorería saneada, e incluso realiza inversiones financieras temporales de más de 500 millones de pesetas para rentabilizar sus excedentes de tesorería, con una rentabilidad inferior en tres puntos respecto a los intereses pasivos soportados por el Ayuntamiento.

Los fondos municipales están depositados, al 31 de diciembre de 1990, en 60 cuentas abiertas en instituciones de crédito, variando el número cada año, y tienen una rentabilidad variable, que oscila entre el 8 por ciento y el 13,65 por ciento a lo largo del período, según cada entidad. La Tesorería sigue la política de depositar los fondos disponibles en las cuentas bancarias correspondientes a las operaciones de tesorería, para disminuir así los costes financieros de estas operaciones, como la mejor forma de rentabilizar los recursos municipales.

Del examen de las Actas de Arqueo, que se levantan con regularidad, se observa la existencia de las anomalías siguientes:

- Se han depositado en la Cámara Urbana de Zaragoza 3.558.419 pesetas, en concepto de fianzas recibidas en el Ayuntamiento por contratos de suministro de agua. Estos depósitos se efectuaron hace varios años, a requerimiento del Ministerio de la Vivienda, por considerar que debían tener el mismo tratamiento que las fianzas de los contratos de arrendamiento de viviendas, y están pendientes de ser regularizados.

- En los ejercicios de 1989 y 1990 se depositaron en la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid valores por importe de 7.420.000 pesetas, en 1989, y 7.960.000 pesetas, en 1990, que fueron devueltos, al cancelarse las garantías a las que estaban afectados, por lo que ya no figuran en las Actas de Arqueo.

Con independencia de las cuentas bancarias de arqueo que recogen los movimientos de la Tesorería municipal, y de cuyos fondos se dispone con la firma conjunta de los tres claveros, se han abierto las siguientes cuentas corrientes:

- Ibercaja, c/c 10.765.04, "Habilitación de personal", para el pago de las retribuciones del personal de la Corporación.

- Ibercaja, c/c 10.613.27 y C.A.I., c/c 8175-08, "Ingresos indebidos", para la devolución de Ingresos indebidos por Contribución Urbana, en situación de liquidación.

- Banco Zaragozano, c/c 22819-3 y C.A.I., c/c 6346-49, "Pagos a justificar", para la gestión centralizada de los Pagos a Justificar.

La disposición de los fondos de estas cuentas se realiza con la firma conjunta del Tesorero y del Jefe de la Sección de Pagos. Estas cuentas se cargan con el importe de los Mandamientos de Pago que se expiden para estos fines, y se abonan con los pagos que se realizan.

3.3.2. *Recaudación*

La recaudación se realiza, en período voluntario, en la Tesorería Municipal a través del ingreso en cualquier entidad financiera de la localidad o directamente en la Caja Municipal. Los ingresos se formalizan diariamente en Presupuestos o VIAP., partida de "ingresos pendientes de aplicación" y decenalmente se contabilizan en el Presupuesto de Ingresos, en su aplicación correspondiente.

Todas las liquidaciones practicadas se notifican a los deudores para su ingreso y una vez vencido el plazo de pago voluntario, se providencian de apremio para su cobro en vía ejecutiva, cargándose al Recaudador ejecutivo para su realización por esta vía.

Las Cuentas de Recaudación se rinden semestralmente y una vez informadas por la Comisión Liquidadora mixta Intervención-Tesorería, Tesorero e Interventor General son aprobadas con regularidad por el Pleno, excepto la cuenta del 2º semestre de 1989, que no fué aprobada hasta el 30 de noviembre de 1992. Debe señalarse que al Recaudador ejecutivo no se le ha declarado el perjuicio de valores, en 1º o 2º grado, en ninguna cuenta, no obstante haberse propuesto reiteradamente la exigencia de esta responsabilidad por la Tesorería Municipal.

Se cumplimenta con regularidad el procedimiento en vía ejecutiva, aunque el porcentaje de ingresos (6,6 por ciento) y bajas por fallidos (10,8 por ciento), según datos del 2º semestre de 1990, es muy bajo, lo que hace que el volumen del pendiente de cobro tenga un aumento considerable y haya crecido un 95 por ciento en el trienio, pasando de 1.825 millones de pesetas, el 1 de enero de 1988, a 3.551 millones de valores pendientes al 31 de diciembre de 1990.

Se señala como anomalía la no llevanza del "Libro Registro General de expedientes de adjudicación de fincas a favor de la Corporación", que tiene carácter obligatorio, así como la inexistencia de fincas adjudicadas en los expedientes de apremio tramitados.

Los porcentajes de recaudación en voluntaria varían entre el 79 y el 87 por ciento y pueden considerarse bastante elevados, y se refieren a padrones o listas cobratorias concretas.

Hay dos anomalías en la recaudación que deben destacarse:

La Diputación Provincial de Zaragoza tuvó a su cargo el cobro de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y la Licencia Fisçal durante los años 1985 y 1986, recibiendo cargos por importe de 8.403 millones de pesetas, de las que ha ingresado 7.497 millones de pesetas y devuelto o justificado como bajas 663 millones, teniendo pendientes de justificar 243 millones, así como la rendición de la cuenta justificativa de su gestión y la devolución de los recibos no cobrados, ya que las Cuentas rendidas por la Diputación en 1990 no han sido aceptadas por el Ayuntamiento, por no devolverse los recibos pendientes de cobro.

La segunda incidencia consiste en la existencia de unos valores en recibo procedentes de la Delegación de Hacienda, por importe de 104 millones de pesetas, de la Contribución Territorial Rústica y Urbana y Licencia Fiscal, anteriores a 1985, que fueron devueltos por la Delegación de Hacienda, y que no han continuado el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, encontrándose en la Tesorería Municipal a disposición de aquellos contribuyentes que voluntariamente quieren abonarlos, pero sin realizarse gestiones para su cobro por la vía de apremio.

En esta misma situación se encuentran los valores pendientes de Contribución Urbana, Rústica y Licencias Fiscales de los años 1987, 1988 y 1989 que no han iniciado todavía, de forma efectiva, el procedimiento recaudatorio de apremio en vía ejecutiva por no haber resuelto la Corporación constituir los Servicios recaudatorios correspondientes, ni cargarse estos valores al Recaudador, agente ejecutivo municipal.

Los valores que se encuentran en esa situación, al 31 de diciembre de 1990, ascienden a 2.428.300.678 pesetas, según el siguiente detalle:

Valores pendientes de recaudación	Pesetas
- Valores anteriores a 1985 (Devueltos por la Delegación Hacienda).	104.463.923
- Valores gestionados por el Ayuntamiento:	
- 1984.	29.552.864
- 1985.	52.453.048
- 1986.	104.444.853
- 1987.	418.631.220
- 1988.	822.568.537
- 1989.	896.186.233
Suma	2.428.300.678

La permanencia de los valores en esta situación produce evidentes perjuicios a la Tesorería Municipal, que necesita hacer uso creciente de créditos de tesorería para atender la gestión normal de los Servicios.

Se lleva en la Tesorería una cuenta de "Valores consignados en Tesorería para estudio de su anulación u otros trámites" que tenía, al 31 de diciembre de 1990, un saldo de 2.744.496.140 pesetas. Esta cuenta resulta necesaria para depurar los valores puestos al cobro en la Recaudación y su saldo ha pasado, desde el 1 de enero de 1988 al 31 de diciembre de 1990, de 1.988,7 millones de pesetas a los 2.744,5 millones de pesetas citados, esto es, ha tenido un aumento del 38 por ciento.

3.4. *Endeudamiento*

Para conocer las necesidades financieras de la Corporación se elaboran los programas financieros, integrados en el Plan cuatrienal de inversiones, donde se establecen las necesidades de financiación que deben ser cubiertas por operaciones de crédito, y que se van actualizando de año en año.

A partir de las previsiones de financiación derivadas del presupuesto anual, se inicia por la Dirección del Area de Hacienda y Economía, el procedimiento para la contratación de las operaciones de crédito, solicitando las autorizaciones administrativas pertinentes, con consulta a varias entidades financieras locales sobre las condiciones económicas y temporales vigentes, seleccionándose las más interesantes para elaborar una propuesta que, una vez aprobada por el Pleno de la Corporación, da lugar a la formalización del documento correspondiente, contrato, póliza, empréstito, etc., que suscribe el Alcalde con la Entidad seleccionada. No se promueve concurso con publicidad para provocar la concurrencia de las ofertas.

Una vez formalizado el documento contractual, el expediente se traslada a Tesorería para el seguimiento del préstamo, tanto para la disposición del mismo como para el pago de los anteriores y amortizaciones, hasta su total cancelación.

En el período fiscalizado se han concertado once préstamos por importe de 36.372.008.333 pesetas, de los que se puede destacar un préstamo multidivisa concertado con el Banco Central en 1.989 por importe de 12.687.008.333 pesetas, destinado a reconvertir parcialmente la deuda existente, quedando 23.685 millones de pesetas como importe neto de la deuda concertada en el trienio 1.988/90.

Estos préstamos se han dispuesto en la forma siguiente:

1.988	Pesetas	Pesetas
Ibercaja	2.000.000.000	
Banco Central	4.185.000.000	
		6.185.000.000
1.989		
B° Crédito Local	2.100.000.000	
" "	1.400.000.000	
Caja Ahorros Inmaculada	750.000.000	
" "	750.000.000	
CAIXA	2.000.000.000	
		7.000.000.000
1.990		
B° Crédito Local	900.000.000	
" "	600.000.000	
" "	7.000.000.000	
Caja de Ahorros Inmaculada	1.000.000.000	
B° Santander	1.000.000.000	
		10.500.000.000
Suma Total		23.685.000.000

Estos préstamos se han concertado, en dos casos, a tipos de interés fijo, y, en todos los demás, a tipo de interés variable, determinado por el MIBOR (Madrid interbanking offered rate) sumado a otra cantidad convenida.

Por excepción, en el préstamo multidivisa concertado con el Banco Central para la refinanciación parcial de la deuda, se ha establecido un tipo de interés variable, obtenido de sumar al LIBOR (London interbanking offered rate) otra cantidad.

El plazo de amortización suele ser de diez o doce años con uno o dos de carencia según los casos, y los préstamos se han aplicado a las finalidades para las que habían sido solicitados.

La evolución de los préstamos vivos en el período ha sido la siguiente.

Préstamos vivos al 1/1/88	Pesetas	Pesetas
1.- Empréstitos	4.624.046.233	
2.- Préstamos	10.154.229.561	14.778.275.794
1.988		
Préstamos dispuestos	6.185.000.000	
Amortizaciones	952.958.729	5.232.041.271

1.989		
Préstamos dispuestos	19.687.008.333	
Amortizaciones	13.720.097.104	5.966.911.229
1.990		
Préstamos dispuestos	10.500.000.000	
Amortizaciones	1.721.043.847	8.778.956.153
Préstamos vivos al 31/12/90		34.756.184.447

Por otra parte, hay que señalar los avales concedidos por acuerdos del Pleno de la Corporación a los préstamos solicitados por la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L., por importe de 3.038.606.346 pesetas, con el detalle siguiente:

Año	Pesetas
1988	580.166.296
1989	353.964.820
1990	2.104.475.230
Suma	3.038.606.346

Estos avales han sido autorizados por la Diputación General de Aragón cuando exceden del 5% de los recursos por operaciones corrientes, y se han destinado a garantizar los préstamos hipotecarios a concertar por la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L. para financiar viviendas promovidas por el Ayuntamiento a través de la sociedad citada, excepto un préstamo de 350 millones, destinado a financiar la operación de desalojo de las familias de la Comunidad Gitana.

A las cifras de endeudamiento de la Entidad, es preciso agregar dos partidas que se omiten en el Pasivo de la Cuenta de Administración del Patrimonio, pero que constituyen deudas pendientes de pago que deben tenerse en cuenta.

La primera es el préstamo sin interés concedido por el Tesoro Público, en virtud del Artículo 6 del Decreto Ley 1/1.987, de 10 de abril, para la devolución de las cantidades ingresadas en exceso por las Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del Artº. 43.1 de la Ley 24/1.983 sobre medidas urgentes de Saneamiento y regulación de las Haciendas Locales. El importe pendiente de devolver del citado préstamo al 31 de diciembre de 1.990 asciende a 1.509.359.857 pesetas, siendo la anualidad de amortización de 223.608.868 pesetas.

La segunda está constituída por el pago aplazado, durante 20 ó 25 años, según los casos, del 95% del precio de compra de las viviendas del Casco Histórico de la ciudad, compradas a la Diputación General de Aragón, siendo la deuda pendiente estimada al 31 de diciembre de 1.990 de 213.498.875 pesetas, y la anualidad de amortización, asimismo estimada, de 12.873.093 pesetas.

La carga financiera crece un 78 por ciento en el período considerado, y, teniendo en cuenta estos ajustes, resultan las siguientes cifras:

Año	Carga financiera	Variación s/Base	Porcentaje s/ recursos ejerc. anterior
1.988	2.711.387.005	100	14,76
1.989	3.291.826.771	121	13,58
1.990	4.833.735.860	178	18,03

Se señala la acusada tendencia al crecimiento de los gastos financieros durante el trienio fiscalizado.[2]

4. *SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS*

Se analizan en este apartado las subvenciones netas recibidas y concedidas por la Corporación, separando las transferencias no finalistas recibidas del Estado, que no requieren una especial atención por formar una parte importante de los ingresos corrientes presupuestarios, de las subvenciones finalistas recibidas o concedidas a terceros, que deben tener un seguimiento especial y distinto, según se destinen a atender gastos corrientes o de capital.

4.1. *Subvenciones obtenidas*

Las transferencias recibidas del Presupuesto General del Estado en concepto de participación en los tributos del Estado, que no tienen, por consiguiente, la naturaleza jurídica de subvenciones, han sido las siguientes:

Años	Pesetas	Variación s/1988 %
1988	6.269.125.451	100
1989	7.770.703.976	124
1990	9.697.977.787	155
Suma	23.737.807.214	

Estas transferencias suponen el 93 por ciento de las ayudas recibidas durante el período fiscalizado y alcanzan el 15,27 por ciento de los derechos liquidados.

Las restantes subvenciones recibidas, que se detallan a continuación, tienen la condición de finalistas y han sido aplicadas a los fines para los que fueron concedidas:

Años	Pesetas	Variación s/1988 %
1988	190.388.644	100
1989	724.280.320	380
1990	858.691.976	451
Suma	1.773.360.940	

Estas subvenciones se han contabilizado en la forma siguiente:

	Pesetas
Presupuesto de Ingresos	1.625.987.405
Valores Independientes y Auxiliares Presupuesto	147.368.535
Suma	1.773.355.940

Debe señalarse que, en algunos casos, las subvenciones aplicadas al Presupuesto se han contabilizado como ingresos imprevistos en el Capítulo III. Asimismo, las aplicadas a VIAP. se han contabilizado en la cuenta de "Fianzas y Depósitos" en lugar de en "Operaciones Diversas".

Nota 2. Se adjunta, en Anexo número 2, estado con la evolución de los préstamos y avales en el período 1.988/90.

Los Organismos que han concedido las subvenciones han sido los siguientes:

	Pesetas	Porcentaje
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo	721.484.557	41
Hacienda Pública Subvenciones Transportes	494.204.179	28
Diputación General Aragón	238.323.668	13
Fondo Social Europeo	116.164.242	7
Otros (INEM, INSERSO, etc.)	203.179.294	11
Suma	1.773.355.940	100

Por su finalidad, estas subvenciones se desglosan en la forma siguiente:

	Pesetas	Porcentaje
Obras Municipales	809.134.670	45
Transporte público	494.204.179	28
Cultura	235.895.647	13
Atenciones Sociales	175.131.625	10
Atenciones Sanitarias	28.947.985	2
Actividades juveniles	27.011.834	2
Otras	3.030.000	--
Suma	1.773.355.940	100

Debe destacarse que en este período se había previsto recibir subvenciones del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Diputación Provincial para construir un Conservatorio de Música, por importe de 150 millones de pesetas en 1989 y la misma cantidad en 1990, de acuerdo con un Convenio suscrito el 9 de diciembre de 1988, que no ha sido posible obtener por insuficiencia del presupuesto inicial previsto para realizar la obra, por lo que se han anulado los citados contraídos, firmándose un nuevo convenio con esta finalidad el 29 de octubre de 1990.

Asimismo, se había previsto recibir una subvención de la Confederación Hidrográfica del Ebro destinada a financiar parcialmente las obras de depuración de las aguas residuales de Zaragoza, de acuerdo con el Convenio suscrito el 11 de enero de 1989, por importe de 792.540.000 pesetas en el período 1987/90. De esta aportación no se ha llegado a percibir ninguna cantidad por considerar la Confederación que el Ayuntamiento no había cumplido con las obligaciones contraídas:

a) Estar al corriente en el pago de las liquidaciones por cánon de vertido.

b) Acreditar documentalmente el cumplimiento de las obras incluidas en el Programa de Actuaciones.

c) Justificar que la subvención no supera el 30 por ciento de la obra ejecutada.

En consecuencia, ha sido preciso anular los derechos contraídos en el período por no haber conseguido dicha subvención. [3]

Nota 3. En Anexo 3 se detalla el Estado resumen de las subvenciones recibidas en el período 1988/1990.

4.2. *Subvenciones concedidas*

El importe total de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza en el trienio 1988/90, según la información obtenida de la contabilidad, asciende a 6.711.943.447 pesetas, que supone el 6 por ciento del total del gasto del período, con el siguiente detalle:

	Pesetas
- Transferencias corrientes	4.770.237.234
- Transferencias de capital	1.941.706.213
Suma	6.711.943.447

Para su análisis, esta cifra puede desglosarse en tres apartados:

a) Subvenciones impropias, esto es, obligaciones que se han contabilizado como transferencias o subvenciones y en realidad son gastos necesarios para el funcionamiento de los Servicios, que se han aplicado indebidamente a este Capítulo.

b) Transferencias a los Patronatos y Sociedades Municipales para nivelar sus Presupuestos.

c) Subvenciones concedidas a terceros para coadyuvar en la realización de los fines de competencia municipal.

a) El primer apartado, que puede cuantificarse en 1.388.310.389 pesetas, (21 por ciento del total), corresponde a pagos por los Servicios de la Agencia Ejecutiva, Transportes urbanos y concesión de un préstamo al Real Zaragoza Club Deportivo, así como al pago a la Hacienda Pública de 335.143.940 pesetas, correspondiente al resto del pago de las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre La Renta de las Personas Físicas, (sobre/Capital Mobiliario) devengadas por los intereses de los últimos cinco años, pagados por el Ayuntamiento a los obligacionistas, titulares de los Empréstitos de Obligaciones de los años 1981, 1985 y 1986, que no habían sido retenidas ni ingresadas en Hacienda por el Ayuntamiento y que fueron detectadas por la Inspección de Hacienda, según Acta levantada el 24 de junio de 1989, por un importe de 446.453.329 pesetas, de las que 360.846.648 pesetas corresponden a las cuotas descubiertas y 85.606.681 pesetas a intereses por demora, que deben aumentarse en 13.277.011 pesetas más, como consecuencia del aplazamiento concedido por Resolución del Delegado de Hacienda de Zaragoza del 31 de octubre de 1989.

b) El segundo apartado, que asciende a 3.039.089.702 pesetas, 45 por ciento del total, corresponde a las transferencias que se conceden a los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento, y que constituyen su recurso financiero más importante. Estas subvenciones corresponden a operaciones corrientes, en el caso de Organismos Autónomos y, por el contrario, a operaciones de Capital cuando se destinan a la Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L.

Debe señalarse el cambio de criterio de la Corporación, en las subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas en el Casco Histórico de la ciudad, que se han considerado como operaciones corrientes en el año 1989 (50 millones de pesetas) y como operaciones de capital en el siguiente 1990 (con 100 millones de pesetas).

Por otra parte, de las subvenciones concedidas a la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L. en concepto de operaciones de capital, para la construcción de viviendas destinadas a arrendamientos subvencionados, que ascien-

den a 894 millones de pesetas, la Sociedad tiene contabilizadas 364 millones de pesetas en concepto de ingreso a cuenta de los gastos originados en la operación de desalojo de las familias gitanas de la Zona "Quinta Julieta" y solo 530 millones como "Subvenciones de capital".

c) El tercer apartado, que suma 2.248.543.356 pesetas, 34 por ciento del total, está constituido por las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a terceros, personas físicas o jurídicas, para la realización de fines de interés general municipal. El importe total de estas subvenciones asciende al 2,1 por ciento de las obligaciones contraídas en el período 1988/90 y puede considerarse normal.

La concesión de estas subvenciones se realiza de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Ejecución de los Presupuestos y las normas especiales reguladoras que se aprueban por el Pleno para cada ejercicio, en función de las distintas finalidades perseguidas.

El procedimiento seguido por el Ayuntamiento consiste en la publicación de las bases para la concesión de las subvenciones, y en recibir las peticiones de ayuda con la documentación exigida en las bases, un programa de actividades, y el presupuesto del mismo. Estas peticiones se informan por los Servicios Municipales correspondientes y se pasan a la Comisión de Gobierno para su aprobación. Se comprueba el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión y se verifican los justificantes de la inversión realizada, que es aprobada, asimismo, por la Comisión de Gobierno.

El detalle de las subvenciones concedidas en el período fiscalizado, por finalidades, es el siguiente:

Subvenciones para Operaciones corrientes	Pesetas	Porcentaje s/total
Atenciones sociales	413.093.423	30,90
Atenciones deportivas	268.365.030	20,07
Atenciones Culturales	218.313.091	16,33
Atenciones Benéficas	213.317.781	15,96
Otros fines	161.747.818	12,10
Obras	62.000.000	4,64
Suma	1.336.837.143	100

Subvenciones para Operaciones de Capital	Pesetas	Porcentaje s/total
Atenciones deportivas	64.917.112	6,85
Atenciones culturales	88.948.308	9,39
Otros fines	4.000.000	0,42
Obras	789.804.793	83,34
Suma	947.670.213	100

Las partidas más destacadas entre las subvenciones para la realización de obras han sido las siguientes[4]:

	Pesetas
Feria de Muestras (1988)	235.000.000
Feria de Muestras (1989)	130.000.000
Mejora espacios deportivos Plan Joven 1989	68.068.030
Mejora espacios deportivos Plan Joven 1990	66.114.535
Hospital Psiquiátrico (DGA)	150.000.000

5. GESTION DEL INMOVILIZADO MATERIAL

5.1. *Inventario de bienes*

La llevanza y custodia del Inventario de Bienes está asignada legalmente a la Secretaría de la Corporación, en tanto que en el Ayuntamiento de Zaragoza las Unidades de Patrimonio e Inventario están encuadradas en el área de Hacienda y Economía, sin que exista constancia de la existencia de la delegación de funciones prevista en el artículo 171 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento.

En el ejercicio de 1987, la Corporación acordó contratar con una empresa especializada la revisión del Inventario existente, al constatar que éste no incluía todos los bienes de propiedad municipal, ni disponía de los datos imprescindibles para identificar los mismos.

En la revisión realizada, que ha finalizado en 1988, se ha actualizado el Inventario municipal de bienes, con la inclusión de una serie de expedientes de bienes muebles e inmuebles y se ha establecido un sistema informático con fichas individualizadas específicas para cada tipo de bien, completadas con los datos precisos para la identificación de los mismos.

Los bienes inmuebles inventariados están inscritos en el Registro de la Propiedad y, en general, se cumplen con regularidad los procedimientos establecidos en las Bases de ejecución de los Presupuestos para mantener actualizado el Inventario, aunque se han encontrado debilidades significativas en el control de la venta de solares y parcelas en suelo urbano, por la falta de coordinación de los distintos Servicios con la unidad encargada de la conservación del Inventario.

Anualmente se aprueban por el Pleno de la Corporación las rectificaciones del inventario general de bienes, donde se recogen las altas y bajas producidas.

No se han realizado amortizaciones en los bienes inventariados, aunque esta posibilidad se recoge en las fichas elaboradas y en el sistema informático, en función de la vida útil de cada bien.

Debe señalarse como anomalía, que no se incluyen en el Inventario las obras de arte, propiedad del Ayuntamiento, recogidas en el "Catálogo de la Colección de Artes Visuales", elaborado en 1983, que comprende 1.116 obras de arte, así como los monumentos existentes en las vías públicas, omisión que está en proyecto subsanar en los próximos ejercicios, habiéndose iniciado en 1992 la recogida de datos.

Todos los bienes propiedad de la Corporación, salvo los terrenos, están asegurados de daños materiales y robos, incluso los bienes de terceros depositados en locales municipales. También se aseguran todos los vehículos, algunos a todo riesgo, y cuando se realizan exposiciones de obras de arte, se asegura el transporte y los eventuales daños que pudieran producirse. El valor de reposición de los bienes, a efectos del Seguro, en el ejercicio de 1990, se ha fijado en 25.000 millones de pesetas para los edificios, 11.000

Nota 4. En anexo número 4 se adjunta el resumen, por ejercicios, de las subvenciones concedidas por la Corporación, clasificadas en función de su finalidad.

millones de pesetas para los puentes y 4.000 millones de pesetas para los bienes muebles. [5]

La Corporación tiene un gran número de propiedades rústicas (19.211 Hectáreas), que se explotan con regularidad; obteniéndose en el ejercicio de 1990 una rentabilidad aproximada del 3 por ciento de la valoración catastral del terreno rústico (montes, aprovechamientos ganaderos y cultivos agrarios). Asimismo, y con independencia de los inmuebles cedidos a la Sociedad Municipal de la Vivienda, tiene arrendados diversos inmuebles urbanos, que han producido unas rentas en 1990 de 3.604.052 pesetas, según la liquidación del Presupuesto de ese año.

También se obtienen rentas por diversas concesiones en aparcamientos o instalaciones municipales, pudiendo destacarse, por su peculiaridad, la situación del Real Zaragoza Club Deportivo, que desde el año 1965, es titular de la concesión administrativa del Campo de Fútbol "La Romareda", que finaliza en el año 2003. Por esta concesión tiene la obligación de pagar un canon y reintegrar los préstamos que con diversos motivos se le han concedido, fundamentalmente para la realización de obras de mejora y acondicionamiento del Estadio.

La morosidad frecuente del Club Deportivo en el pago de estas cargas, ha elevado la deuda pendiente al 31 de diciembre de 1990, a 34.690.103 pesetas, arrastrándose cargos, sin cancelar, desde antes de 1986.

En el ejercicio de 1988, el Pleno de la Corporación concedió una ayuda de 50 millones de pesetas al Real Zaragoza, de los cuales 25 millones tenían el cáracter de subvención para cooperar en las obras realizadas en el Estadio y los otros 25 millones eran un préstamo reintegrable en doce años, siendo los dos primeros de carencia.

El pago de esta ayuda no se condicionó a la regularización previa de sus obligaciones financieras con el Ayuntamiento, por lo que la deuda pendiente ha continuado en aumento desde esa fecha.

5.2. *Enajenación de suelo municipal*

De las Liquidaciones de los Presupuestos se deduce que, en el trienio 1988/90, se han realizado ventas de terrenos, tanto por enajenación de parcelas sobrantes de la vía pública como por la venta de activos urbanísticos, por los importes siguientes:

Año	Pesetas
1988	46.582.806
1989	1.381.225.376
1990	3.023.854.041
Suma	4.451.662.223

Se anularon posteriormente contraídos por 971.049.705 pesetas, 22 por ciento del total, cuantía que resulta elevada y que obedece a diversas causas, entre las que destaca el hecho de que se contraen en los libros contables como derechos liquidados operaciones de venta en fases anteriores a la adjudicación, lo que origina frecuentes anulaciones cuando las subastas quedan desiertas. Asimismo, la baja irregular de 128 millones de pesetas, que se detalla en este apartado, realizada en la venta de una parcela en "Quinta Julieta", es otro de los motivos de estas anulaciones.

Las ventas de solares se realizan normalmente por subasta, excepto en el caso de parcelas sobrantes de la vía pública, en el que se realiza, previamente, una oferta a los propietarios colindantes. Se ha enajenado también suelo municipal mediante concurso a cooperativas para la construcción de viviendas de protección oficial, a los precios de repercusión legalmente establecidos.

La tramitación de estos procedimientos se realiza por la Gerencia de Urbanismo, en el caso de suelo urbanizable, y por el Servicio de Patrimonio y Contratación en los casos restantes.

Una anomalía es la falta de anotación en el Inventario General de Bienes de la totalidad de la venta que realiza la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L. de cinco solares de propiedad municipal en el año 1988. Estos solares habían sido cedidos por el Ayuntamiento a la Sociedad en los años 1985, 1986 y 1987 y fueron vendidos, en pública subasta, en el año 1988, formalizándose en escritura pública tanto la cesión a la Sociedad Municipal de la Vivienda como la venta a terceros en 1988. Sin embargo, en el Inventario de Bienes sólo han sido dadas de baja dos de las cinco fincas citadas, continuando las otras tres incluidas en el Inventario, sin ninguna modificación.

Ha podido comprobarse que las altas y bajas producidas como consecuencia de la gestión urbanística no se recogen en su totalidad en el Inventario de bienes. De la muestra seleccionada de las transacciones realizadas se ha encontrado un 19 por ciento de operaciones que no se incluían en Inventario, así como otros desajustes temporales de hasta un año de demora, desde la efectividad del alta o la baja y su anotación en el Inventario, no obstante haberse formalizado en escritura pública la operación.

Otra operación de venta de terrenos que ha tenido un tratamiento en la contabilidad presupuestaria que puede calificarse de irregular, ha sido la enajenación de terrenos en "Quinta Julieta".

En el Presupuesto de Ingresos de 1989 se incluye una partida, la 612.02, de 492.815.780 pesetas, para recoger el importe de la venta, por subasta pública, de una parcela de 24.850 metros cuadrados en el término de Miraflores, paraje "Quinta Julieta", que fué adjudicada a la empresa AMISGAR S.A., por lo que se contabilizó la venta como derecho reconocido en el ejercicio, por la misma cuantía, pasando a 1990 como Resultas de ingresos, por no haberse hecho efectivo el pago dentro del año. En 1990 se contrae en Resultas la cantidad de 364 millones de pesetas, que se ingresa oportunamente, dando de baja la diferencia de 128.815.780 pesetas sin ninguna explicación.

Esta cantidad, dada de baja en Presupuesto, fue ingresada por Amisgar S.A., en la Tesorería Municipal, el día 1 de agosto de 1990 y contabilizada en VIAP., Rúbrica 6.5 "Depósitos y fianzas", dándole salida al día siguiente por Mandamiento de pago número 11.832, a favor de la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L, en concepto de tercer pago correspondiente al acuerdo del Pleno de 18 de febrero de 1988.

Este ingreso debió de contabilizarase en el Presupuesto de Ingresos y no pagarse sin la previa habilitación del crédito correspondiente en el Presupuesto de Gastos.

6. PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES

En el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha constituido el Registro de contratos que establece el artículo 110 de la Ley de Contratos del Estado, ni se lleva el Libro Registro de proposiciones que, con el carácter de registro especial, determina el artículo 31 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, por lo que la información sobre esta materia se ha obtenido directamente de las dos unidades administrativas que gestionan la contratación municipal, el Servicio de Patrimonio y Contratación, que se ocupa de la contratación en general, y la Gerencia de Urbanismo, que gestiona la contratación de carácter urbanístico.

El Servicio de Patrimonio y Contratación viene utilizando, sin diligenciar por el Secretario General, un libro Registro de Escrituras y Contratos, donde se recogen todos los contratos tramitados por esa Unidad, y un libro Registro de Proposiciones para las subastas y concursos que se inician en la misma.

Nota 5. Se adjunta como Anexo número 5 un estado con la evolución del Inventario de bienes en el período fiscalizado.

El número total de contratos formalizados en el periodo fiscalizado ha sido el siguiente:

Años	Servicio de Contratación	Gerencia de Urbanismo	Total
1988	68	145	213
1989	86	116	202
1990	89	211	300
Sumas	243	472	715

Los importes contratados han sido los siguientes:

Años	Servicio de Contratación	Gerencia de Urbanismo	Total
1988	1.768.032.999	2.688.710.049	4.456.743.048
1989	3.348.984.074	5.072.859.848	8.421.843.922
1990	5.611.975.586	36.249.612.393	41.861.587.979
Sumas	10.728.992.659	44.011.182.290	54.740.174.949

Los contratos de particular fiscalización por el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley 7/1988, suponen el 31 por ciento del total de contratos suscritos, según el detalle siguiente:

Años	Servicio de Contratación	Gerencia de Urbanismo	Total
1988	24	23	47
1989	45	30	75
1990	32	66	98
Sumas	101	119	220

Estos contratos tenían las siguientes finalidades:

Años	Obras	Servicios	Suministros	Otros	Total
1988	40	3	3	1	47
1989	57	2	6	10	75
1990	88	4	5	1	98
Sumas	185	9	14	12	220

Y se adjudicaron de la forma que se detalla a continuación, representando la contratación directa casi el 50 por ciento del total de los contratos formalizados:

Años	Subasta	Concurso	C. Directa	Total
1988	2	27	18	47
1989	5	26	44	75
1990	23	29	46	98
Sumas	30	82	108	220

Se han seleccionado para su examen, con un muestreo de criterio, treinta contratos suscritos en el período fiscalizado, por importe de 29.032.819.685 pesetas, 53 por ciento del total contratado, con el siguiente detalle:

Año	Pesetas
1988	1.218.132.081
1989	2.257.954.352
1990	25.556.733.252
Suma	29.032.819.685

Estos contratos tienen las siguientes finalidades:

Años	Obras	Suministros	Servicios	Otros	Total
1988	9	1	--	--	10
1989	8	1	--	1	10
1990	5	1	3	1	10
Sumas	22	3	3	2	30

El importe inicial de estos contratos es el siguiente:

Años	Obras	Suministros	Servicios	Otros	Total
1988	1.168.132.081	50.000.000	--	--	1.218.132.081
1989	2.209.954.352	48.000.000	--	--	2.257.954.352
1990	24.895.510.232	97.782.876	535.006.262	28.433.882	25.556.733.252
Sumas	28.273.596.665	195.782.876	535.006.262	28.433.882	29.032.819.685

Una vez examinados los contratos seleccionados, se han puesto en conocimiento de los Servicios correspondientes las anomalías encontradas, que han sido subsanadas parcialmente, incluyéndose en este informe únicamente las observaciones que no han sido suficientemente aclaradas.

Otros contratos especiales

Con independencia de los contratos citados, se han formalizado once contratos de préstamos para financiar las inversiones presupuestadas en el trienio, por importe de 36.372.008.333 pesetas, siguiendo el procedimiento que se detalla en el apartado 3.4.

Asimismo se han suscrito 17 pólizas de crédito o contratos, por las operaciones de Tesorería concertadas, por importe de 23.867.143.150 pesetas, con el siguiente detalle:

Años	Número Pólizas	Pesetas
1988	6	6.000.000.000
1989	4	8.487.143.150
1990	7	9.380.000.000
	Suma	23.867.143.150

Procedimiento contractual

Se ha seleccionado, por considerar que refleja el procedimiento habitualmente utilizado por la Corporación, un expediente de contratación de obras, iniciado y concertado en el ejercicio de 1990, que se expone a continuación de forma resumida.

Se trata de las obras de remodelación de la Plaza del Pilar, por importe de 2.525.011.676 pesetas.

El crédito para esta obra está previsto en el Programa de Gastos Plurianuales de 1990 con el siguiente detalle:

Año	Millones de Pesetas
1990	450
1991	1.230
1992	850
Suma	2.530

El pago de la obra ejecutada debe ajustarse a las anualidades previstas.

El Proyecto Técnico se aprueba por el Pleno de la Corporación el día 4 de octubre de 1990 y no hay constancia de que se haya realizado posteriormente el replanteo previo de las obras para comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos para la viabilidad del proyecto.

Se acuerda por el Pleno, como forma de adjudicación, la contratación directa, previos los informes legales preceptivos, basándose en la reconocida urgencia de las obras en razón al colapso del tráfico urbano, y en que se están realizando en ese momento las obras para la construcción de dos estacionamientos subterráneos en la misma plaza.

Para provocar la concurrencia de ofertas se publica un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, presentándose ocho Empresas. Se abren las plicas el 18 de octubre, y se adjudica, con una baja del 1,01 por ciento, el 31 de octubre a la Empresa que presentó la mejor oferta económica y temporal, 9 meses.

La adjudicación de la obra no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ni en el de la Provincia, formalizando un contrato administrativo, previa la constitución de una fianza de 111.000.467 pesetas, el 11 de diciembre de 1990.

El replanteo de la obra se realiza el día 5 de noviembre y el acta de recepción provisional se levanta el 2 de agosto de 1991.

Sin embargo, para el traslado de un monumento, se amplía el plazo de ejecución en dos meses y medio por acuerdo del 1 de octubre de 1991, esto es, después de recibida la obra, formalizándose una nueva recepción del citado traslado en otra acta levantada posteriormente.

Se han expedido 8 certificaciones de obra, siendo la última del 20 de noviembre de 1992, por un importe de 354.209.305 pesetas, liquidándose la obra en la misma cuantía de la adjudicación.

Las siete primeras certificaciones están suscritas únicamente por dos de los cuatro directores de la obra. Tan sólo en la última certificación, que liquida la obra, firman los cuatro directores.

6.1. ***Contratación de obras***

De la muestra de los 22 expedientes de contratatación de obras resultan las siguientes observaciones, que no han sido suficientemente justificadas por los Servicios correspondientes:

- La redacción y dirección del proyecto de obras no se realiza por técnicos de la Corporación o, en su caso, de la Diputación Provincial, en un 10 por ciento de los casos, sin que se justifique la necesidad de la asistencia técnica de profesionales ajenos a las citadas Entidades.

- El replanteo previo del proyecto técnico, que debe efectuarse para comprobar la realidad geométrica de la obra, la viabilidad del proyecto, y la disponibilidad de los terrenos, no se ha realizado en el 41 por ciento de los expedientes.

- El pliego de condiciones no ha sido dictaminado por la Secretaría de la Corporación, con anterioridad a su aprobación por el Pleno, en el 10 por ciento de los casos.

- El pliego de condiciones y la propuesta de autorización no han sido informados por la Intervención General, ni consta la existencia previa de consignación presupuestaria, en el 10 por ciento de la muestra.

- En el expediente contractual no se justifica la necesidad del concurso como forma de adjudicación, en el 20 por ciento de los casos.

- El pliego de condiciones y el acuerdo de su autorización no consta hayan sido publicados, a efectos de reclamaciones, en 7 casos.

- En cinco expedientes, no consta el envío de los anuncios al Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.

- El acuerdo de adjudicación y la comunicación de la cuantía de la fianza, no consta hayan sido notificados en la forma reglamentaria, en 3 casos.

- La adjudicación definitiva no se ha publicado específicamente en el Boletín Oficial en 15 de los expedientes examinados, si bien el Ayuntamiento señala que todos los acuerdos del Pleno, que incluyen las adjudicaciones, se publican, con carácter general, en el Boletín Oficial de la Provincia.

- No consta en el expediente que se haya comprobado el replanteo del proyecto técnico, en 5 de los casos examinados.

- No se ha cumplido con el plazo establecido en el contrato para la ejecución de la obra, en 5 de los expedientes contractuales.

- La recepción provisional de la obra no se ha formalizado mediante acta que conste en el expediente, en 5 de los casos.

6.2. ***Servicios, suministros y otros***

Después del exámen de ocho expedientes de esta clase de contratos, restan las anomalías siguientes, que no han sido solventadas por los Servicios correspondientes:

- El pliego de condiciones no ha sido dictaminado por la Secretaría de la Corporación antes de su aprobación por el Pleno, en dos de los casos.

- El pliego de condiciones y la propuesta de autorización de la contratación y del gasto no han sido informados por la Intervención General, en dos de los casos.

- En la selección del adjudicatario por contratación directa, no se acredita la consulta previa a otras empresas en un supuesto.

- El informe técnico no evalúa las ofertas presentadas según los criterios fijados para la selección en los pliegos de condiciones en un caso.

- La adjudicación definitiva no ha sido publicada en los Boletines Oficiales en 6 de los expedientes examinados, si bien el Ayuntamiento publica en el Boletín Oficial de la Provincia todos los acuerdos de los Organos Colegiados donde se han adjudicado estos contratos.

- En un caso, se ha realizado una adjudicación de un Servicio a una Empresa, que, según el informe de la Comisión Técnica, no era la que tenía la mayor puntuación según el baremo aprobado en el Pliego de Condiciones. Esta resolución, separándose de la propuesta de adjudicación, no ha sido motivada.

- No hay constancia de que se haya procedido a la devolución de la fianza en uno de los casos.

7. SERVICIOS PÚBLICOS, ORGANISMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES.

Se analizan en este punto, de forma global, una serie de servicios públicos y los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza, fiscalizándose, en los apartados siguientes, los tres casos seleccionados.

a) Servicios públicos municipales

Se han verificado los datos de las liquidaciones presupuestarias relativas a los siguientes Servicios públicos:

a) Servicios con ingresos procedentes de tasas o precios públicos:

- Cementerios.
- Recogida de residuos sólidos urbanos.
- Abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado.
- Mercados.
- Prevención y extinción de incendios.
- Instalaciones deportivas.
- Matadero.
- Transporte colectivo de viajeros.

b) Servicios sin contraprestación económica:

- Alumbrado público.
- Limpieza viaria.
- Acceso a núcleos de población y pavimentación de vías públicas.
- Control de alimentos y bebidas.
- Parques y jardines públicos.
- Bibliotecas públicas.
- Tratamiento de residuos sólidos.
- Protección civil.
- Servicios Sociales.
- Protección del medio ambiente.
- Vigilancia pública.
- Educación Preescolar y General Básica.

En relación con el grupo de Servicios financiados con tasas o precios públicos, debe señalarse el incumplimiento generalizado de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en Régimen Local, que establece la obligación de fijar las tarifas de las tasas por prestación de servicios y realización de actividades de forma que su rendimiento total cubra el coste de los mismos.

En ninguno de los casos examinados, los ingresos cubren el coste de los servicios, siendo el porcentaje más alto de cobertura, el del Servicio de suministro de agua, donde los ingresos cubren hasta el 97 por ciento del coste, en 1988, bajando a 95 por ciento y 91 por ciento, respectivamente, en los dos ejercicios siguientes. En el extremo opuesto se encuentra el Servicio de Incendios, donde los ingresos no llegan, al 3 por ciento del coste, en ninguno de los ejercicios examinados.

La misma observación debe formularse en la aplicación de los precios públicos, que, se realiza por primera vez en el ejercicio de 1990, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

Estos precios deben cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado, según establece el artículo 45 de la citada Ley, y, en el caso de fijar precios públicos por debajo de su coste, será preciso consignar en los presupuestos de la Entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha fijado, en todos los casos examinados, precios que no cubren el coste de los servicios prestados, sin consignar presupuestariamente estas dotaciones, con olvido de la normativa citada. [6]

b) Organismos Autónomos Municipales

En el período fiscalizado han funcionado con regularidad los siguientes organismos:

- Patronato Municipal de Comedores Escolares.
- Patronato de Biblioteca Pública.
- Patronato Municipal de Teatros.
- Patronato Municipal de la Universidad Popular.
- Patronato Municipal de la Filmoteca.
- Patronato Municipal de Turismo.
- Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.

Además, en 1989 se constituyeron dos nuevos organismos, el Patronato Municipal del Ballet Clásico, que aprueba su primer Presupuesto en junio de 1989, presentando sus cuentas en el ejercicio siguiente, y el Consorcio Audiorama, que se transforma en sociedad mercantil en 1991, con el nombre de Audiorama Zaragoza S.A., por lo que únicamente se han verificado las cuentas de 1989 y 1990.

En todos los Organismos se ha comprobado la aprobación de los presupuestos y la rendición de las cuentas obligatorias, así como la contabilidad y la Tesorería. Los Patronatos de la Universidad Popular y Municipal de Teatros han sido objeto de un control más amplio, con examen de la gestión presupuestaria y financiera.

Los Presupuestos aprobados para estos Organismos han sido los siguientes:

	Presupuestos aprobados			
Organismo	1988	1989	1990	Variación 90/88 %
Patr. Munpl. Comedores Escolares	52.616.523	81.948.800	96.025.107	182
Patr. Biblioteca Pública	45.451.000	66.901.000	100.800.000	222
Patr. Munpl. de Teatros	103.501.000	155.001.000	234.300.000	226
Patr. Univers. Popular	122.268.000	128.502.000	153.652.000	126
Patr. Munpl. de la Filmoteca	19.301.000	28.401.000	34.001.000	176
Patr. Munpl. de Turismo	68.250.000	75.402.000	76.400.000	112
Patr. Munpl. Escuelas Infantiles	172.779.555	181.385.000	197.961.000	114,5
Patr. Ballet Clásico	...	55.000.000	100.300.000	..
Consorcio Audiorama	...	218.262.000	215.062.000	..

Nota 6. En el Anexo número 6 se detallan los costes e ingresos de estos servicios.

Las principales incidencias que se han encontrado en el examen de las cuentas de estos Organismos son:

- La inexistencia de los libros de Inventarios y Balances, Auxiliares de Caja y Registros de Mandamientos de Ingreso y Pago.
- No se han rendido las Cuentas de Tesorería.
- En algunos Patronatos se producen demoras en la rendición de cuentas, especialmente las de Administración del Patrimonio, y en la actualización del Inventario de bienes.
- Los ingresos por prestación de Servicios o venta de publicaciones que estaban percibiendo en este período los Patronatos de la Filmoteca, Escuelas Infantiles, Turismo y Universidad Popular, no estaban regulados por Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Corporación, sino que fueron aprobados únicamente por sus respectivos Organos rectores.

c) Sociedades Mercantiles

En el ejercicio de 1990, tan solo una sociedad, la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L., con un capital social, de 300 millones de pesetas, tiene una actividad permanente y continuada de años anteriores, pero en este ejercicio inician su actuación otras dos, también con el 100 por ciento de su capital de propiedad municipal, "Zaragoza Cultural S.A.", con un capital de 10 millones de pesetas, e "Instalaciones Deportivas Municipales S.A.", con un capital de 10 millones de pesetas. Estas dos Sociedades han formalizado la escritura de constitución el 15 de abril de 1991, por lo que han quedado excluidas de la fiscalización realizada.

El Ayuntamiento tiene una participación mayoritaria, del 51 por ciento del capital social, en la Sociedad "Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza S.A.", MERCAZARAGOZA, siendo MERCASA, Empresa Nacional de Mercados Centrales de Abastecimiento S.A., titular de un 48,83 por ciento, y otros accionistas, del 0,17 por ciento restante. El capital social de esta Sociedad en 1992 era de 1.450 millones de pesetas.

7.1. *Patronato de la Universidad Popular*

Este Organismo se crea en el año 1983, como un Centro de formación permanente, para que los adultos y jóvenes puedan ampliar y profundizar conocimientos, así como mantenerse crítica y responsablemente en contacto activo con los cambios que se producen en la vida social.

Los Organos rectores son:

- Junta Rectora-presidida por el Alcalde.
- Comisión de Gobierno.
- Presidente.
- Director-Administrador.

En el examen de sus cuentas se han encontrado las siguientes incidencias:

- No se ha dispuesto del libro de Actas de las Sesiones celebradas por la Junta Rectora y la Comisión de Gobierno en el año 1988.
- En la Contabilidad se observa la falta de los libros de Inventario y Balances, Auxiliar de Caja y de Cuentas Corrientes, así como anomalías en el libro General de Gastos, donde no se cuantifican los créditos contraídos ni los disponibles, y en el de Rentas y Exacciones, donde no figuran los saldos pendientes de cobro.
- No se han rendido las Cuentas de Tesorería y las restantes se han rendido con mucho retraso sobre el período legalmente señalado.
- No se ha podido constatar la existencia de un Inventario de bienes separado.

Se ha realizado un análisis de los Mandamientos de Ingreso y Pago sobre una muestra, de 216 elementos seleccionados aleatoriamente, y que supone el 3 por ciento de la población, que ascendía a 7.198, obteniendo los resultados siguientes:

- No consta la aprobación del gasto en ninguno de los comprobantes examinados.
- No consta la recepción del material o la prestación del servicio en ninguna factura o expediente.
- Falta la firma del Presidente del Patronato en el Mandamiento de Ingreso número 63, de 10 de marzo de 1988, y en el Mandamiento de Pago número 165, de 19 de abril de 1988.
- En el Mandamiento de Pago número 33, de 30 de enero de 1988, faltan las facturas justificativas.

7.2. *Patronato Municipal de Teatros de Zaragoza*

Este Organismo se crea en el año 1981 con la finalidad de difundir el teatro y los espectáculos conexos, como necesidad cultural de la ciudad, velando, asimismo, por la rentabilidad cultural de los teatros municipales.

Los Organos rectores son:

- Junta Rectora, presidida por el Alcalde.
- Comisión de Gobierno.
- Presidente.
- Director Gerente.

Del examen de sus cuentas resultan las siguientes incidencias:

- En la Contabilidad se observa la falta de los libros de Inventarios y Balances, Auxiliar de Caja, Auxiliar de Cuentas Corrientes y Auxiliares de pagos a justificar del Director Gerente.
- Los libros Diarios de Intervención de Ingresos y Pagos agrupan todas las operaciones en un solo asiento mensual.
- En el Libro General de Gastos no se registran las obligaciones reconocidas, ni los créditos disponibles y en el de Rentas no figuran los saldos pendientes de cobro.
- No se rinden las Cuentas de Tesorería y las restantes Cuentas anuales se rinden con mucho retraso sobre los plazos legales establecidos.

Se ha realizado un análisis de la gestión financiera sobre una muestra de 267 elementos, seleccionada aleatoriamente, que supone el 10 por ciento de los Mandamientos de Ingreso y Pago formalizados en el período auditado, que ascienden a 2.663, así como las nóminas de personal de cuatro meses, cada año, con los siguientes resultados:

- En las hojas diarias de ingresos por taquilla no consta la firma del liquidador o taquillero, y, en el año 1988, no figura en las mismas, la conformidad del Director-Gerente.

- En los Mandamientos de Pago no se adjuntan las copias de los contratos justificativos de los mismos.

- Los Mandamientos de Ingreso por cesión de las instalaciones para conciertos, recitales etc.., no adjuntan las autorizaciones de los Organos rectores competentes.

- Los justificantes de los pagos están autorizados por el Director Gerente, pero no consta la conformidad del Presidente en los gastos, ni en los pagos.

- Falta la firma del Presidente en el Mandamiento de Pago número 388, de 17 de julio de 1990, y la del Director-Gerente en el Mandamiento de Pago número 668, de 28 de diciembre del mismo año.

7.3. *Sociedad Municipal de la Vivienda S.L.*

La Sociedad Municipal de la Vivienda se constituyó como Sociedad Limitada el 9 de octubre de 1981, mediante la transformación en Sociedad Mercantil del anterior Patronato Municipal de la Vivienda, siendo su objeto social actual la promoción de viviendas en régimen de alquiler.

Según el artículo 3º de sus Estatutos, esta Sociedad tenía en el período fiscalizado los siguientes cometidos:

a) La realización de estudios urbanísticos.

b) Actuaciones urbanizadoras, promoción de suelo y realización de obras de infraestructura urbana.

c) La gestión y explotación de obras y servicios.

d) Promoción de la vivienda social para venta y alquiler.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de 30 de octubre de 1987, se resuelve que la Sociedad oriente su actividad futura en la promoción de la construcción de viviendas para su arrendamiento a personas con bajo nivel de renta.

La administración de la Sociedad está a cargo de los Organos siguientes:

- Junta General de Accionistas, asumido por el Pleno de la Corporación Municipal.

- Consejo de Administración, con nueve miembros, entre natos y electivos, siendo Presidente el Alcalde de la Corporación.

- Gerente, designado por el Consejo de Administración.

La Sociedad lleva todos los libros oficiales de contabilidad que establecen las normas vigentes y ha rendido las cuentas que determina la legislación vigente, que han sido objeto de control financiero por delegados de la Intervención General de la Corporación. Las Cuentas del ejercicio de 1990 han sido depositadas en el Registro Mercantil, pero no consta que hayan sido auditadas en la forma dispuesta en la vigente Ley de Auditoría de Cuentas.

La Sociedad no ha presentado el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación que establece el artículo 87 de la Ley General Presupuestaria, ni tiene aprobado un estudio financiero de sus actuaciones.

Se ha realizado un control de los asientos y documentos contables, seleccionando una muestra opinática con los siguientes porcentajes de la población:

Años	Total asientos	Muestra seleccionada	Porcentaje %
1988	2.220	110	5
1989	1.700	106	6,2
1990	3.060	1.031	33,7
Sumas	6.980	1.247	17,8

Del examen de esta muestra se han obtenido los siguientes resultados:

- No consta, en las facturas de los proveedores, diligencia acreditativa de la recepción del material o de la realización del servicio.

- En los soportes documentales examinados no figura la firma de la persona autorizada ordenando el pago de las facturas o certificaciones de obras.

- En los requerimientos de pago que realiza la Sociedad, no figura la fecha de emisión, ni la firma del Gerente o persona autorizada.

- En el ejercicio de 1988 se han cobrado 329.964 pesetas por alquileres de diversos pisos propiedad del Ayuntamiento, que no han sido cedidos a la Sociedad.

Del examen de las cuentas anuales se pueden señalar las siguientes anomalías:

Ejercicio de 1988

- Se incluyen en la cuenta "Terrenos y Solares", 1.565.000 pesetas que corresponden a opciones de compra de determinados solares y que deben figurar en una cuenta del grupo 21 - "Inmovilizado inmaterial", hasta tanto se materializa la compra.

- La Sociedad ha vendido, previa la autorización del Pleno de la Corporación, cinco solares que habían sido cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento para el cumplimiento de sus fines sociales, y que estaban valorados en cero pesetas en el Activo Municipal.

  Estas ventas, realizadas por subasta, han supuesto un ingreso extraordinario de 610.678.199 pesetas y han sido contabilizadas como una partida más en la cuenta de Explotación cuando, como señala acertadamente el informe de control financiero, debieron considerarse como un resultado extraordinario, en unión del rendimiento de las inversiones financieras temporales realizadas con esos recursos.

Ejercicio de 1989

- Se ha contabilizado como "Subvenciones en capital" la cantidad de 50 millones de pesetas, recibida del Ayuntamiento para financiar el programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas del Casco Antiguo, que no tiene la condición de

subvención, sino de entrega a justificar, por lo que debería contabilizarse en una cuenta del grupo 4°, teniendo en cuenta que la Sociedad actúa como entidad delegada en la gestión de los beneficios concedidos en la Ordenanza municipal.

Ejercicio de 1990

- En la cuenta de "Subvenciones en capital" se incluye un importe de 100 millones de pesetas recibidos del Ayuntamiento para financiar el programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas del Casco Antiguo, por lo que se reitera la observación anterior.

- Se considera correcta la imputación de las subvenciones recibidas a efectos contables, pero debe tenerse en cuenta que, a efectos fiscales, las subvenciones de capital deben amortizarse en el plazo máximo de diez años.

- En la cuenta de Deudores se incluye al Ayuntamiento de Zaragoza con una partida de 83.183.887 pesetas en concepto de saldo a favor de la sociedad por las gestiones realizadas por cuenta de la Corporación en la operación "Quinta Julieta". Esta cantidad sigue viva, sin cancelar, en el momento de efectuarse esta fiscalización, en el año 1993. Esta demora en el pago debe devengar intereses.

Los resultados de la gestión de la sociedad, en los ejercicios fiscalizados, han sido los siguientes:

	1988	1989	1990	Total
Pérdida de explotación	(49.690.892)	(33.476.031)	(77.135.238)	(160.302.161)
Resultados financieros positivos	40.688.500	59.084.653	32.707.431	132.480.584
Resultados extraordinarios	610.736.049	152.758	32.465.452	643.354.259
Resultado del ejercicio	601.733.657	25.761.380	(11.962.355)	615.532.682

El examen de estas cifras indica una difícil situación para la Sociedad, que tiene un déficit de explotación permanente y que no recibe recursos ni subvenciones para atender a sus gastos corrientes, por un planteamiento inadecuado de su funcionamiento. Sus ingresos provienen, básicamente, de los arrendamientos de viviendas y de las subvenciones de capital que recibe para construir viviendas sociales.

La creación de la Sociedad responde a la necesidad que tiene el Ayuntamiento de disponer de un instrumento ágil para realizar una serie de programas de carácter social de la forma más eficiente posible, pero con total respeto a la legalidad vigente, que condiciona las actuaciones de las administraciones públicas.

Se parte de que el objetivo actual de la Sociedad es la promoción de viviendas sociales en régimen de alquiler y que, en orden al cumplimiento de esta finalidad, la Corporación ha resuelto subvencionar los alquileres de las viviendas hasta un 50 por ciento de su importe, ya bajo, por tratarse de viviendas de protección oficial. Es evidente que el coste de este programa, de claro carácter social, debe cuantificarse en los presupuestos anuales del Ayuntamiento y ser aprobado en los mismos, constituyendo un ingreso ordinario de la Sociedad. En el sistema actual, la Empresa construye las viviendas con las subvenciones de capital que recibe de la Corporación y los préstamos, por supuesto avalados, una vez construidas, procede a su arrendamiento al tipo de alquiler que le corresponde como vivienda protegida, pero al cobrar este arrendamiento se rebaja el mismo con el importe de la subvención concedida, que pasa a ser un menor ingreso de la Sociedad, en lugar de un gasto de carácter social de la Corporación. Es decir, el Ayuntamiento está concediendo subvenciones de carácter social, que deben ser incluidas en sus operaciones corrientes, y financiándolas, de forma encubierta, a través de subvenciones de capital destinadas a la construcción de viviendas.

En el supuesto de que la empresa siga obteniendo resultados negativos en su gestión, a pesar de recibir esta subvención, será preciso conceder una nueva subvención para operaciones corrientes que restablezca el equilibrio, ya que, en otro caso, se producirá una descapitalización de la sociedad.

Deben señalarse otras dos anomalías en las relaciones del Ayuntamiento con la Sociedad Municipal de la Vivienda. La primera se refiere a la cesión gratuita de solares para el cumplimiento de los fines sociales, que posteriormente han sido vendidos por la Sociedad, sin ningún condicionamiento, para su edificación libre, y la segunda a la llamada "Operación Quinta Julieta".

Venta de solares

Los solares vendidos fueron cedidos inicialmente a la Sociedad, vinculados al cumplimiento de sus fines sociales, quedando exentos de tributación fiscal por la transmisión.

Posteriormente se autorizó la venta, en pública subasta, de cinco parcelas que no se consideraban aptas para la construcción de viviendas sociales. Por acuerdo del Pleno de la Corporación, los ingresos resultantes de esta venta deberían destinarse a la realización de promociones de viviendas de tipo social y tendrían carácter finalista. Este acuerdo significa la concesión, de forma encubierta, de una subvención de capital, que, sin embargo, no ha sido respetada por la Sociedad, que ha considerado el importe de la venta como un ingreso ordinario procedente de sus operaciones de tráfico, lo que ha originado un beneficio extraordinario, en el ejercicio de 1988, de 610 millones de pesetas y una elevada rentabilidad de la tesorería en ese año y en el siguiente.

Asimismo, el cambio de destino de la cesión de los solares, ha dado lugar a la obligación de tributar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por un importe total de 15.979.993 pesetas, que ha sido pagado por la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L., por lo que esta forma encubierta de subvencionar a la Empresa, además de enmascarar la transferencia de recursos, tiene un coste fiscal que no existe en las transferencias de capital que se realizan habitualmente.

Operación Quinta Julieta

Este problema se origina como consecuencia del acuerdo del Pleno de la Corporación de 18 de febrero de 1988, que delega en la Sociedad Municipal de la Vivienda la ejecución de todas las actuaciones necesarias para hacer efectivas las ayudas económicas y pagos, a cargo del Ayuntamiento, para erradicar el chabolismo en la zona de Quinta Julieta, avalando la petición de un préstamo de 350 millones de pesetas y garantizando el pago de todos los gastos que origine la citada operación, a cuyo efecto "se compromete a adoptar las oportunas previsiones presupuestarias".

En cumplimiento del citado acuerdo, la Sociedad ha realizado los pagos siguientes:

	Pesetas
- Indemnizaciones y gastos a las familias de la Comunidad Gitana	356.780.657
- Intereses cuenta de crédito de 350 millones de pesetas	92.912.353
- A la Diputación General de Aragón, por cuenta del Ayuntamiento	126.306.657
Suma	575.999.667

Para compensar estos pagos se han recibido del Ayuntamiento la siguientes cantidades:

	Pesetas
1" pago, subvención de capital (10/7/90) 021.762/89	180.000.000
2' pago, subvención de capital (2/8/90) 021.762/89	184.000.000
3" pago, parte del precio de la venta de una parcela municipal (no ingresada en el Presupuesto municipal)	128.815.780
Suma	492.815.780

Resumen

	Pesetas
- Pagos	575.999.667
- Ingresos	492.815.780
Saldo a favor de la Sociedad a cargo Ayuntamiento	83.183.887

Esta situación se arrastra desde agosto de 1990, sin que se haya realizado ningún pago posterior por parte del Ayuntamiento.

Las principales anomalías halladas son las siguientes:

1° Aplicar a gastos corrientes, de finalidad social, transferencias de capital que deben utilizarse en financiar la construcción de viviendas.

2° Reducir el ingreso presupuestario procedente de la venta de una parcela de 24.850 metros cuadrados, en 128.815.780 pesetas, que han sido entregadas a la Sociedad Municipal de la Vivienda, anulando dicha cantidad como "baja" en la liquidación del Presupuesto de 1990, cuando debe figurar como pendiente de cobro o como ingresada.

3° No cumplir el acuerdo del Pleno de 18 de febrero de 1988, que estable que deben incluirse en el Presupuesto del Ayuntamiento las dotaciones presupuestarias precisas para atender los gastos de la llamada "Operación Quinta Julieta".

4° El pago de 126.306.657 pesetas que realiza la Sociedad a la Diputación General de Aragón, por cuenta del Ayuntamiento, y de la que no se ha podido encontrar el documento que ordena el pago, que obedece a la obligación del Ayuntamiento de liquidar las cantidades pendientes de pago, al Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, por la compra de la parcela donde estaban situadas las casas de las familias de la Comunidad Gitana. Este pago no se formaliza en el Presupuesto, donde si se han contabilizado todos los pagos anteriores realizados a cuenta de esta adquisición.

8. ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

La ordenación territorial en el Municipio de Zaragoza en trienio 1988-1989, está regulada por el Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado en el año 1986.

Este Plan es el tercero aprobado desde la promulgación de la Ley del Suelo en 1956 y aprovecha la experiencia obtenida en los Planes anteriores.

El primer Plan, aprobado en 1959, plantea una ciudad concéntrica, cerrada por un "anillo agrícola" y fue superado, en el periodo de su vigencia, por la aprobación de los Planes de Desarrollo que impusieron un modelo urbanístico distinto.

El Segundo Plan, de 1968, establece las pautas para ordenar el crecimiento urbano, articulando una Red Arterial viaria para estructurar el conjunto urbano.

El Plan vigente, del año 1986, se orienta, en una voluntad de intervención de la Administración Pública en los procesos urbanos, a resolver las carencias urbanísticas, dando prioridad a completar la ciudad existente antes de continuar con una expansión exterior.

El Plan fue diseñado para regir dos periodos cuatrienales y dentro del mismo deben integrarse las Normas Urbanísticas aprobadas en 1987 para regular las Ordenanzas de Edificación y uso del suelo.

El suelo del Municipio de Zaragoza se clasifica urbanísticamente en la forma siguiente:

Suelo urbano	2.946 Ha.	2,73 %
" urbanizable programado.	561 Ha.	0,52 %
" urbanizable no programado.	1.578 Ha.	1,46 %
" no urbanizable.	99.689 Ha.	92,42 %
Sistema generales (incluído viario arterial).	3.101 Ha.	2,87 %
SUMA	107.875 Ha.	100 %

En el Plan se establecen Directrices para regular los puntos siguientes:

- Desarrollo urbano a largo plazo.
- Crecimiento urbano a medio plazo.
- Completar la estructura y las arterias urbanas.
- Mejora del medio urbano.
- Centro Histórico de la villa.

Las grandes líneas del Programa de Actuación del Plan pueden sistematizarse en las siguientes:

1. Infraestructura viaria y de transporte

Comprende las acciones relativas a la red viaria del sistema general, instalaciones de transporte urbano y ferroviario, comunicaciones, infraestructuras hidráulica y sanitaria, así como urbanización y Parques públicos.

2. Infraestructuras básicas

Se programaron y ejecutaron obras de conducción y abastecimiento de agua potable y de colectores.

3. Equipamiento

- Docente.
- Sanitario.
- Deportivo.
- Asistencial.
- Cultural.
- Servicios municipales, institucionales y de protección.

4. Espacio libres

Acciones para crear parques de escala urbana.

5. Patrimonio Municipal del Suelo

Adquisiciones de suelo edificable en el Centro Histórico de la ciudad e inversiones en suelo no urbanizable para acciones de otro tipo.

6. Vivienda

El programa sólo se refiere a Viviendas de Promoción Pública (VPP), Viviendas de Protección Oficial (VPO) y, a acciones de rehabilitación promovidas por la Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L., empresa participada íntegramente por el Ayuntamiento de Zaragoza.

7. Desarrollo del Planeamiento

- Planes de Reforma Interior en Suelo Urbano.
- Planes parciales en suelo urbanizable programado.

8.1. *Actuaciones Urbanísticas*

En la documentación examinada únicamente se ha podido obtener una información de tipo cualitativo donde se enumeran las actuaciones planeadas, así como las obras realizadas y pendientes de ejecución, pero no ha sido posible cuantificar las previsiones y las realizaciones, por lo que se desconocen las desviaciones existentes entre las inversiones programadas en el Estudio Económico-Financiero del Plan y las inversiones realmente efectuadas.

Otro tanto puede decirse respecto al Patrimonio Municipal del Suelo, ya que el cumplimiento del Programa se expresa en superficies y no en cifras presupuestarias de inversión. Por consiguiente, no se evalúa el incremento del Patrimonio mediante las adquisiciones, cesiones, expropiaciones y permutas verificadas.

Para poder verificar el grado de cumplimiento entre inversiones programadas y realizadas, en el período presupuestario 87-90, deberían figurar las acciones del programa debidamente desagregadas y cuantificadas, pero la verificación no ha sido posible ya que una misma acción figura en distintos programas o partidas de gasto. Asimismo, se desconoce la cuantificación de las aportaciones de las distintas Administraciones Públicas, Estatal o Autonómica y, obviamente, los compromisos financieros incumplidos. De los datos existentes se deduce que las previsiones aprobadas se han cumplido parcialmente y, que, por otra parte, se han realizado obras no contempladas en el Programa, por cuantías significativas. Sin embargo, no se dispone de información suficiente para establecer un balance de las actuaciones urbanísticas.

La Corporación debe tomar medidas para establecimiento de un sistema adecuado de seguimiento del cumplimiento de los compromisos económico-financiero derivados del planeamiento urbanístico. [7]

8.2. *Patrimonio Municipal del Suelo*

Según establece la normativa vigente, la constitución de este Patrimonio tiene carácter obligatorio para todos los Municipios capitales de provincia, desde el año 1956, debiendo aportarse anualmente el 5 por ciento del Presupuesto ordinario para su dotación e incremento. Este Patrimonio debe constituir un patrimonio separado de los restantes bienes municipales y los ingresos que se obtengan del mismo se destinarán a su conservación y ampliación.

En el Ayuntamiento de Zaragoza no hay constancia de la existencia de un inventario de bienes inmuebles, separado del Inventario General de Bienes Municipales, que permita conocer la dotación de este Patrimonio y su evolución anual a través de las altas y bajas que se produzcan. Asimismo, se constata el incumplimiento de la obligación de destinar el 5 por ciento del Presupuesto ordinario a la dotación de este Patrimonio.

Nota 7. En el anexo número 7 figuran los resultados de los planes parciales, planes específicos y estudio de detalle analizados.

En el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 se establecía, dentro del programa de actuaciones, la adquisición de fincas en el Casco Histórico de la ciudad y de suelo no urbanizable en el Acampo del Hospital, así como otras acciones de defensa del medio natural en las riberas y Galacho de Juslibol.

En el período 1987/90 se han adquirido 750.864 metros cuadrados de suelo, sin que sea posible evaluar su coste por haberse obtenido por distintas vías, justiprecio, avenencia, cesiones por aprovechamiento medio, etc, encontrándose, en algunos casos, la valoración de los bienes pendientes de sentencias de los Tribunales.

La unidad administrativa encargada de la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo es el Servicio de Suelo y Vivienda, dependiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, pero la inexistencia de un inventario separado con los bienes que integran este Patrimonio ha impedido verificar su situación inicial en 1988 y su evolución en el trienio 1988/90.

No obstante, se han seleccionado, por muestreo de criterio, 21 operaciones, que comprenden adquisiciones, enajenaciones, expropiaciones, permutas, cesiones y transmisiones del derecho de superficie, que se han cruzado con la información disponible del Inventario General de Bienes, resultando que cuatro de las operaciones seleccionadas, 19 por ciento de la muestra, no han sido inscritas en el Inventario, no obstante haberse formalizado la transacción, en todos los casos, en escritura pública.

8.3. *Control y disciplina urbanística*

Estaban sujetos al control del Ayuntamiento, según establecía el artículo 178 del Real Decreto 1346/76 de 9 de abril, por el que se aprobó el textorefundido sobre régimen del suelo y ordenación urbana, todos los actos de edificación y uso del suelo como:

- Las parcelaciones urbanas.
- Los movimientos de tierra.
- Las obras de nueva planta, modificación de estructura, etc..
- La primera utilización de los edificios y modificaciones del uso de los mismos.
- La demolición de construcciones.
- La colocación de carteles.
- Los demás actos que señalen los Planes.

La actuación municipal de control urbanístico da lugar al devengo de una tasa por concesión de licencias urbanísticas, que está regulada en el ejercicio de 1990 por la Ordenanza fiscal número 13.

Se han concedido 1.190 licencias urbanísticas para obras mayores, con el siguiente detalle:

Año	Licencias
1988	408
1989	409
1990	373
Suma	1.190

De estas licencias hemos separado las correspondientes a obras de cierta consideración y, de las mismas, se ha seleccionado una muestra aleatoria del 4,2 por ciento obteniendo 50 expedientes que han sido requeridos a los Servicios correspondientes para su fiscalización.

Se han entregado únicamente 33, sin que se hayan explicado los motivos de la falta de los 17 restantes.

En el examen de los citados expedientes de licencias de obras se han encontrado las siguientes anomalías:

- En ningún expediente consta el certificado de conclusión de obra, por lo que no se practican las liquidaciones definitivas, que establece el artículo 3° de las Ordenanzas Fiscales. Excepcionalmente, en los expedientes números 3.082.64-1/88 y 3.105.972/89 se han realizado liquidaciones definitivas ingresándose en la Tesorería Municipal las diferencias resultantes.

- En las viviendas de protección oficial no se acredita la constitución del aval bancario exigido en la normativa vigente, hasta la concesión de la calificación correspondiente. De los 23 expedientes de VPO. examinados, tan sólo en dos consta la fotocopia de la Carta de Pago acreditativa de la constitución de la citada garantía.

- En el expediente número 3.183.671/89 no se justifica el pago de las tasas y la constitución del aval bancario, que ascienden a 1.074.503 pesetas y 9.670-.518 pesetas, respectivamente.

Para comprobar el cumplimiento de la disciplina urbanística, se han seleccionado 33 expedientes sancionadores de entre aquéllos que tienen cierta importancia, en función de su cuantía. Se han recibido 30 expedientes, desconociéndose los motivos por los que no se han entregado los tres restantes.

En el examen de estos expedientes se han observado las siguientes anomalías:

- No consta que se haya ejecutado ninguna de las órdenes de demolición dictadas por la Alcaldía-Presidencia por la realización de obras sin licencia en suelo no urbanizable.

  Tampoco hay constancia de la ejecución subsidiaria de las obras de demolición por parte del Ayuntamiento.

- Esta negligencia de la Administración ha dado lugar a la prescripción de todas las infracciones señaladas en los expedientes examinados.

- Los trámites de las sanciones económicas impuestas en los citados expedientes ofrece el resultado siguiente:

	Porcentaje %
- Sanciones abonadas en período voluntario de cobranza	34
- Sanciones que se encuentran en vía de apremio ejecutivo	15
- Aplazamientos autorizados	3
- Anulaciones y bajas	30
- Sanciones reducidas	3
- Sin datos	15
Suma	100

9. TRAMITE DE ALEGACIONES

El escrito de actuaciones practicadas en este procedimiento fiscalizador se trasladó, con fecha 14 de septiembre de 1993, al Ayuntamiento de Zaragoza para que, en un plazo de 15 días, presentara las alegaciones que estimase pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La Corporación solicitó un prórroga del plazo establecido para la presentación de alegaciones, que fue concedida.

La Corporación mediante escrito de 14 de octubre de 1993, expone sus alegaciones, que se incorporan al presente procedimiento.

Como resultado de las alegaciones presentadas se ha tomado en consideración la explicación municipal en cuanto a la no calificación como una contingencia en el pasivo del Ayuntamiento de las cantidades recaudadas por el impuesto sobre solares.

Se han incorporado al informe algunos extremos relacionados con el contenido de las Bases de ejercicios de los presupuestos.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. *Conclusiones*

1. En las Bases para la ejecuciónde los Presupuestos se aprueban normas para el reconocimiento de obligaciones procedentes del ejercicio anterior. A estos fines se habilita, de manera incorrecta, una única partida presupuestaria para atender a esta obligaciones.

2. En los Presupuestos de 1988 y 1989, se incluyen, dentro del "Capítulo IV, Transferencias corrientes", diversos conceptos que corresponden al Capítulo II "Compra de bienes corrientes y servicios".

3. En el ejercicio de 1990 se destinan recursos procedentes de operaciones de capital a atender gastos ordinarios, con infracción de lo dispuesto en los artículos 5 y 50 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales.

4. Los expedientes de modificación de créditos se aprueban, con cierta frecuencia, una vez finalizado el ejercicio al que se refieren.

5. Los suplementos de crédito aprobados para atender a los anticipos del personal, no cumplen con la normativa establecida en las Bases para la ejecución de los Presupuestos aprobados y en la legislación vigente.

6. En la Liquidación definitiva del Presupuesto de 1989 se produce un déficit de 73.834.646 pesetas, que ha sido compensado parcialmente aprobando el Presupuesto para 1991 con un superávit inicial de 28.300.000 pesetas, inferior al déficit señalado.

7. La incorporación de los remanentes de crédito del ejercicio anterior se formaliza contablemente como si fuesen Resultas de Gastos, sin tener en cuenta su naturaleza y la limitación a un único ejercicio que establece la ley.

8. Se contraen, con cierta frecuencia, créditos en los libros General de Gastos y de Rentas y Exacciones por obligaciones y derechos que no están formalmente liquidados, con infracción de lo dispuesto en las Reglas 58 y 59 de la antigua Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales de 1952, y en las 108 y 160 de la vigente.

9. Se contabilizan en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, determinados ingresos y pagos que tienen naturaleza de operaciones presupuestarias.

10. El importe de los valores pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1990, según la cuenta de Recaudación, supera el Pendiente de cobro de la Liquidación del Presupuesto del mismo ejercicio, en 1.893.356.573 pesetas, sin tener en cuenta los Valores en suspenso consignados en Tesorería para su estudio o anulación, que ascienden en esa fecha a 2.744.496.140 pesetas.

11. La cuenta de Administración del Patrimonio no incluye, en el Activo, los bienes culturales y artísticos propiedad del Ayuntamiento incluidos en el "Catálogo de la Colección de Artes Visuales", editado en 1983.

12. No se incluye en el Pasivo de esta Cuenta la deuda pendiente con el Tesoro Público al 31 de diciembre de 1990, por importe de 1.509.359.857 pesetas, por reintegro del préstamo efectuado para la devolución de la Contribución Territorial Urbana, Rústica y Pecuaria (Real Decreto-Ley nº 1/1987), ni la deuda pendiente con la Diputación General de Aragón por 213.498.875 pesetas (estimada) por el pago del precio aplazado de las viviendas del Caso Histórico de la ciudad adquiridas por el Ayuntamiento.

13. En el año 1990, 136 Mandamientos de Pago, que corresponden a pagos realizados por transferencias bancarias, no tienen la firma del Ordenador de Pagos.

14. No se han podido fiscalizar, por no haber sido entregadas al Equipo de fiscalización, las cuentas justificativas de siete Mandamientos de Pago "a justificar", por importe total de 395 millones de pesetas.

15. En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos, donde se practican más de 17.000 liquidaciones anuales por transmisiones de dominio, se anulan en los ejercicios de 1988 y 1989, derechos liquidados por cuantías superiores al 20 por ciento del contraído, por defectos en las liquidaciones realizadas.

16. La Tasa de equivalencia del Impuesto sobre Incremento del Valor de los terrenos, que debía liquidarse el 31 de diciembre de 1989, ha liquidado en el ejercicio de 1991, por problemas derivados de la indefinición de determinados conceptos legales.

17. Los Padrones aprobados para el Impuesto sobre Solares, no han sido puestos al cobro, en los ejercicios de 1988 y 1989, por estar recurridas gran número de liquidaciones, al considerar que no procedía la exacción de este Impuesto al no tener debidamente aprobado el Registro Municipal de Solares.

18. Se han soportado recargos en la liquidación de las cuotas de la Seguridad Social por importe de 1.424.218 pesetas, por omisiones y retrasos en la presentación de los partes de altas y bajas del personal.

19. No se ha constituido el Registro de Personal que establece con carácter obligatorio la Ley 30/1984.

20. En los ejercicios de 1988 y 1989 la Tesorería Municipal ha concertado operaciones de Tesorería para cubrir déficits temporales de liquidez, en tanto que la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L. realizaba inversiones financieras para rentabilizar sus excedentes de Tesorería, con diferenciales en los tipos de interés superiores a tres puntos.

21. En la Tesorería Municipal se centraliza una parte importante de los fondos librados para "pagos a justificar", que se custodian en una cuenta corriente abierta con esta denominación y cuya disposición se realiza con la firma conjunta del Tesorero y del Jefe de la Sección de Pagos.

22. Para los valores pendientes de cobro en vía ejecutiva de Contribución Urbana, Rústica y Licencias Fiscales, devueltos por la Delegación de Hacienda, anteriores a 1985, así como para los procedentes de la gestión del propio Ayuntamiento hasta el año 1989, no se ha iniciado de forma efectiva el procedimiento recaudatorio de apremio, por no tener el Ayuntamiento organizados los Servicios recaudatorios correspondientes.

23. La Diputación Provincial de Zaragoza no ha rendido cuentas, ni devuelto los valores pendientes de cobro, de su gestión como Recaudador de las Contribuciones Urbana, Rústica y Pecuaria y Licencias Fiscales de los ejercicios de 1985 y 1986.

24. El Ayuntamiento tiene avalados los préstamos solicitados por la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L. por importe de 2.688.606.346 pesetas para la construcción de viviendas destinadas a arrendamientos subvencionados. Dada la situación financiera de esta Empresa, es previsible que el Ayuntamiento tenga que asumir la amortización de los préstamos concertados, una vez transcurrido el período de carencia de los mismos.

25. La Confederación Hidrográfica del Ebro suscribió un Convenio con el Ayuntamiento para financiar parcialmente las obras de depuración de las aguas residuales de Zaragoza por importe de 792.540.000 pesetas en el período 1987/90, sin que haya entregado ninguna cantidad hasta 1993, por considerar que el Ayuntamiento no había cumplido con las obligaciones contraídas en el Convenio suscrito.

26. En los años 1988 y 1989, se contabilizan en el Capítulo IV, "Transferencias corrientes", gastos de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva, transportes públicos, impuestos y otros que tienen la consideración de gastos necesarios para el funcionamiento de los Servicios.

27. En el Inventario General de Bienes no se incluyen las 1.116 obras de arte propiedad del Ayuntamiento, detalladas en el "Catálogo de la Colección de Artes Visuales", elaborado en 1983.

28. El Real Zaragoza C.D. tenía pendiente de pago, al 31 de diciembre de 1990, el canon por la cesión del Campo de Fútbol y el reintegro de diversos préstamos, por un importe total de 34.690.103 pesetas, arrastrando cargos sin cancelar desde antes de 1986. En 1988 el Ayuntamiento le concedió ayudas financieras por 50 millones de pesetas, sin que haya cancelado la deuda pendiente.

29. Se realizan adquisiciones, ventas o cesiones de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, que no se dan de alta o baja en el Inventario General de Bienes, debido a la falta de coordinación entre los distintos Servicios de la Gerencia de Urbanismo y la Unidad encargada de la conservación del Inventario, para mantener actualizado el mismo.

30. En la venta de una parcela de 24.800 metros cuadrados en el término de Miraflores, paraje "Quinta Julieta", realizada por pública subasta y adjudicada en 492.815.780 pesetas a la Empresa AMISGAR S.A., no se ha contabilizado como ingreso en Presupuesto la cantidad de 128.815.780 pesetas. Esta cantidad ha sido ingresada en VIAP, rúbrica de Depósitos y Fianzas y se ha pagado a la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L., a través de esta misma rúbrica, para reducir el saldo deudor en los pagos realizados por la citada empresa, por cuenta del Ayuntamiento, en el desalojo de las familias gitanas residentes en "Quinta Julieta".

31. En el ejercicio de 1989 la Inspección de Hacienda ha levantado un Acta previa por no haber formulado el Ayuntamiento la autoliquidación e ingreso en el Tesoro Público, de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta del Impuesto de las Personas Físicas, (sobre/Capital Mobiliario) de los intereses pagados en los Empréstitos de Obligaciones de los años 1981, 1985, y 1986.

Este Acta importa 446.453.329 pesetas de las que 360.846.648 pesetas corresponden a las cuotas descubiertas y 85.606.681 pesetas a intereses de demora. Esta deuda se ha incrementado en 13.277.011 pesetas, por nuevos intereses de demora y ha sido pagada con la aplicación presupuestaria: Intereses empréstitos/89 por 124.586.400 pesetas y con Subvenciones/89 por el resto.

10.2. *Recomendaciones*

1. Cumplimentar, tanto en la elaboración del Presupuesto como en la tramitación de las modificaciones de créditos, la normativa establecida, evitando la aprobación de suplementos de crédito una vez vencido el ejercicio al que se refieren y respetando el destino legal de los recursos procedentes de la enajenación de inversiones reales y de las operaciones de crédito.
2. Verificar, en la incorporación de los remanentes de crédito de ejercicios anteriores, que se procede a la anulación del crédito no dispuesto, una vez transcurrido el año para el que ha sido autorizada la incorporación.
3. Comprobar que las retenciones de crédito por obligaciones reconocidas y los derechos liquidados se realizan por hechos contables ciertos, que se correspondan con actos administrativos de liquidación de obligaciones y derechos, evitando contabilizar simples estimaciones que no reflejan, en ningún caso, la imagen fiel de las actuaciones administrativo-financieras.
4. Contabilizar en los Presupuestos la totalidad de los ingresos y gastos de la Corporación, reservando el uso de la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto para los casos específicos en que así se determine en la normativa contable.
5. Coordinar la gestión financiera de la Corporación con objeto de que los estados financieros de la Liquidación del Presupuesto coincidan con los datos de las restantes Cuentas de gestión y Recaudación.
6. Incluir en el Inventario General de Bienes municipales y en el Activo de la Cuenta de Administración del Patrimonio las obras de arte propiedad municipal, incluidas en el "Catálogo de la Colección de Artes Visuales", editado por el Ayuntamiento de Zaragoza en 1983.
7. Actualizar el Pasivo de la Cuenta de Patrimonio incluyendo el saldo de los préstamos pendientes de reintegro al Tesoro Público, concedidos en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley número 1/1987, y a la Diputación General de Aragón por el saldo pendiente de pago, por la venta de inmuebles del Casco Histórico al Ayuntamiento.

   Asimismo, se recomienda incluir en la misma, como una posible carga financiera, la relación de los avales concedidos por la Corporación.
8. Se debe cumplir con rigor la normativa vigente en materia de "pagos a justificar", velando por el cumplimiento de los plazos para la rendición de las cuentas justificativas y su aprobación por los Organos competentes, y estudiar en qué casos puede proceder la aplicación del sistema de anticipos de Caja fija, en función de las necesidades de la Corporación.
9. Proceder al estudio de la situación del Impuesto Municipal sobre solares, suprimido a partir del ejercicio de 1990, que tendrá que ser considerada detenidamente por la Corporación, para resolver las anomalías existentes.
10. Debe requerirse a la Diputación Provincial de Zaragoza la rendición de la Cuenta de Recaudación de los ejercicios de 1985 y 1986 y la devolución de los valores pendientes de cobro de los mismos.
11. Debe poner al cobro, en vía ejecutiva, por el procedimiento de apremio, la totalidad de los valores pendientes de cobro por Contribución Territorial Rústica y Urbana y Licencias Fiscales, hasta el ejercicio de 1989, aprobando las medidas precisas para su ejecución.
12. Se recomienda cumplir con las condiciones establecidas en el Convenio suscrito con la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder recibir la subvención pendiente, concedida por la misma, para cooperar en la financiación de las obras de depuración de las aguas residuales de Zaragoza.
13. Deben coordinarse las actuaciones de los Servicios de la Gerencia de Urbanismo con la unidad encargada de la conservación del Inventario General de Bienes, con objeto de que se mantenga permanentemente actualizado el mismo.
14. Los saldos deudores que mantiene el Ayuntamiento con la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L. desde 1990, por la llamada operación "Quinta Julieta", deberán ser cancelados en cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Corporación de 18 de febrero de 1988.
15. La Sociedad Municipal de la Vivienda S.L. debe presentar sus Programas de Actuación, Inversiones y Financiación, y el Ayuntamiento tendrá que estudiar la regularización de la situación financiera de esta Sociedad,considerando satisfacer, con cargo a sus Presupuestos, las subvenciones concedidas en los arrendamientos suscritos, que está soportando actualmente la Sociedad.

   Asimismo deberá verificar que las subvenciones de capital que le concede se destinen a la construcción de viviendas subvencionadas y no a cubrir déficits de explotación.
16. Los bienes inmuebles que integran el Patrimonio Municipal del Suelo deben constituir un patrimonio separado de los restantes bienes municipales, por lo que se recomienda la formación de un Inventario específico para poder verificar su afectación al cumplimiento de los fines a las que está adscrito.
17. Las actuaciones urbanísticas programadas deberán ser debidamente cuantificadas para poder evaluar el grado de cumplimiento de los programas aprobados.

Madrid, 21 de diciembre 1993

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Adolfo Carretero Pérez

ANEXOS

11. ANEXOS

1. Liquidaciones de los Presupuestos de Gastos e Ingresos:

   1988
   1989
   1990
2. Evolución de los Préstamos vivos y de los Avales concedidos en el período 1988/1990.
3. Estado resumen de las subvenciones recibidas en el período 1988/1990.
4. Estado resumen de las subvenciones concedidas en el período 1988/1990.
5. Evolución del Inventario de Bienes en 1988/1990.
6. Resumen de los costes e ingresos de los Servicios públicos municipales.
7. Actuaciones urbanísticas analizadas

Ayuntamiento de Zaragoza

Anexo número 1

Período: 1988-1990

Liquidaciones de los Presupuesto de Ingresos y Gastos

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 1988									
CONCEPTO	PREVISION INICIAL (1)	MODIFIC. (2)	PREVISION DEFINITIVA (3)=(1)+/-(2)	DERECHOS LIQUIDADOS (4)	ESTRUCT CONTRDO %	NIVEL CUMPL PLIM.PTO %	RECAUD. LIQUIDA (5)	NIVEL EJ. CONTRDO %	PENDIENTE (6) = (4)-(5)
CAP.0 Resultas	8.463.880.464		8.463.880.464	6.812.348.485		80,49	5.897.359.969	86,57	914.988.516
OPERACIONES CORRIENTES (1/5)									
CAP.1 Imp.directos	9.088.513.000		9.088.513.000	10.014.373.748	26,59	110,19	5.349.637.092	53,42	4.664.736.656
CAP.2 Imp.indirectos	1.210.000.000		1.210.000.000	1.227.995.640	3,26	101,49	1.078.332.824	87,81	149.662.816
CAP.3 Tasas y otros	6.530.883.000	53.240.320	6.584.123.320	6.485.927.710	17,22	98,51	4.637.764.337	71,51	1.848.163.373
CAP.4 Transferencias	7.032.592.000		7.032.592.000	6.409.295.013	17,02	91,14	5.609.295.013	87,52	800.000.000
CAP.5 Ingr.patrim.	305.959.000		305.959.000	111.388 322	0,30	36,41	88 651 458	79,59	22.736.864
OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)									
CAP.6 Enaj.invers.reales	170.000.000		170.000.000	46 582 806	0,12	27,40	11 611 094	24,93	34 971 712
CAP.7 Transferencias	0		0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)									
CAP.8 Variac.activos financ.	3.050.000	172.948.245	175.998.245	175 998 245	0,47	100,00	79 927 222	45,41	96 071 023
CAP.9 Variac.pasivos financ.	4.267.262.000	8.917.490.742	13.184.752.742	13.184.752.742	35,01	100,00	12 185 000 000	92,42	999 752 742
TOTAL INGRESOS (0/9)	37.072.139.464	9.143.679.307	46.215.818.771	44.468 662 711	100	96,22	34.937.579.009	78,57	9.531.083.702
Ingresos tributarios (1/3)	16.829.396.000	53.240.320	16.882.636.320	17.728.297.098	47	105,01	11.065.734.253	62,42	6.662.562.845
Ingresos Ctes. u Ordin. (1/5)	24.167.947.000	53.240.320	24.221.187.320	24.248.980 433	64,40	100,11	16.763 680.724	69,13	7.485.299 709
Ingresos de Capital (6/7)	170.000.000	0	170.000.000	46.582.806	0,12	27,40	11.611.094	24,93	34.971.712
Ingresos no financieros (1/7)	24.337.947.000	53.240.320	24.391.187.320	24.295.563.239	64,52	99,61	16.775 291.818	69,05	7.520.271 421
Ingresos financieros (8/9)	4.270.312.000	9.090.438.987	13.360.750.987	13.360.750.987	35,48	100,00	12.264.927.222	91,80	1.095.823.765
Ingr. ejerc. corriente (1/9)	28 608.259.000	9.143.679.307	37.751.938.307	37.656 314.226	100,00	99,75	29.040.219.040	77,12	8.616 095.186

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 1988

CONCEPTO	PREVISION INICIAL (1)	MODIFIC. (2)	PREVISION DEFINITIVA (3)=(1)+/-(2)	OBLIGACIONES LIQUIDADAS (4)	ESTRUCT CONTRDO %	NIVEL CUMPL. PLIM.PTO %	PAGOS LIQUIDOS (5)	NIVEL EJEC. CONTRDO %	PENDIENTE (6) = (4)-(5)
CAP.0 Resultas	10.839.180.037		10.839.180.037	10.109.631.691		93,27	8.678.941.289	85,85	1.430.690.402
OPERACIONES CORRIENTES (1/4)									
CAP.1 Retribuc.personal	9.952.963.000	30.622.401	9.983.585.401	9.697.232.342	28,19	97,13	9.215.854.661	95,04	481.377.681
CAP.2 Compra bienes y serv.	6.800.894.000	5.506.183	6.806.400.183	6.614.841.799	19,23	97,19	4.969.884.718	75,13	1.644.957.081
CAP.3 Intereses	2.204.194.000	(19.565.661)	2.184.628.339	2.137.982.043	6,21	97,86	1.397.241.145	65,35	740.740.898
CAP.4 Transferencias	1.422.778.000	84.259.212	1.507.037.212	1.473.347.118	4,28	97,76	979.596.632	66,49	493.750.486
OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)									
CAP.6 Inversiones reales	7.449.801.911	(100.810.307)	7.348.991.604	6.963.569.166	20,24	94,76	2.364.241.356	33,95	4.599.327.810
CAP.7 Transferencias	312.375.258	70.100.000	382.475.258	356.100.000	1,04	93,10	235.550.000	66,15	120.550.000
OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)									
CAP.8 Variac.activos financ.	40.000.000	134.948.245	174.948.245	172.948.245	0,50	98,86	172.948.245	100,00	0
CAP.9 Variac.pasivos financ.	967.444.000	6.021.128.492	6.988.572.492	6.988.547.301	20,31	100,00	2.915.280.633	41,72	4.073.266.668
TOTAL GASTOS (0/9)	39.989.630.206	6.226.188.565	46.215.818.771	44.514.199.705	100	96,32	30.929.538.679	69,48	13.584.661.026
Gastos Ctes. u Ordinar. (1/4)	20.380.829.000	100.822.135	20.481.651.135	19.923.403.302	57,91	97,27	16.562.577.156	83,13	3.360.826.146
Gastos de Capital (6/7)	7.762.177.169	(30.710.307)	7.731.466.862	7.319.669.166	21,28	94,67	2.599.791.356	35,52	4.719.877.810
Gastos no financieros (1/7)	28.143.006.169	70.111.828	28.213.117.997	27.243.072.468	79,18	96,56	19.162.368.512	70,34	8.080.703.956
Gastos Financieros (8/9)	1.007.444.000	6.156.076.737	7.163.520.737	7.161.495.546	20,82	99,97	3.088.228.878	43,12	4.073.266.668
Gastos ejerc. corriente (1/9)	29.150.450.169	6.226.188.565	35.376.638.734	34.404.568.014	100,00	97,25	22.250.597.390	64,67	12.153.970.624

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 1989

CONCEPTO	PREVISION INICIAL (1)	PREVISION MODIFIC. (2)	PREVISION DEFINITIVA (3)=(1)+/-(2)	DERECHOS LIQUIDADOS (4)	ESTRUCT CONTRDO %	NIVEL CUMPL PLIM.PTO %	RECAUD. LIQUIDA (5)	NIVEL EJEC. CONTRDO %	PENDIENTE (6) = (4)-(5)
CAP.0 Resultas	13.539.124.032		13.539.124.032	12.294.997.489		90,81	9.259.073.416	75,31	3.035.924.073
OPERACIONES CORRIENTES (1/5)									
CAP.1 Imp.directos	9.634.000.000		9.634.000.000	10.503.146.578	16,55	109,02	3.727.400.953	35,49	6.776.045.625
CAP.2 Imp.indirectos	1.275.000.000		1.275.000.000	1.269.306.728	2,00	99,55	1.143.135.524	90,06	126.171.204
CAP.3 Tasas y otros	6.409.163.000	11.000.000	6.420.163.000	6.209.145.542	9,79	96,71	5.149.538.404	82,93	1.059.607.138
CAP.4 Transferencias	8.496.882.000	3.150.000	8.500.032.000	8.688.998.505	13,69	102,22	7.050.523.779	81,14	1.638.474.726
CAP.5 Ingr.patrim.	123.258.000		123.258.000	133.443.339	0,21	108,26	106.387.745	79,73	27.055.594
OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)									
CAP.6 Enaj.invers.reales	1.009.000.000		1.009.000.000	1.381.225.376	2,18	136,89	31 377.970	2,27	1.349.847.406
CAP.7 Transferencias	420.360.000		420.360.000	380.000.000	0,60	90,40	0	0,00	380.000.000
OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)									
CAP.8 Variac.activos financ.	2.500.000	312.181.111	314.681.111	314.681.111	0,50	100,00	123 589 554	39,27	191.091.557
CAP.9 Variac.pasivos financ.	12.611.182.000	24.787.143.150	37.398.325.150	34 574 151 483	54,49	92,45	30.374 398 741	87,85	4 199.752 742
TOTAL INGRESOS (0/9)	53.520.469.032	25.113.474.261	78.633.943.293	75.749.096.151	100	96,33	56.965.126.086	75,20	18.783 970.065
Ingresos tributarios (1/3)	17.318.163.000	11.000.000	17.329.163.000	17 981.598.848	28	103,76	10.019 774.881	55,72	7.961.823.967
Ingresos Ctes. u Ordin. (1/5)	25.938.303.000	14.150.000	25.952.453.000	26.804.040.692	42,24	103,28	17.176 686.405	64,08	9.627.354.287
Ingresos de Capital (6/7)	1.429.360.000	0	1.429.360.000	1.761.225.376	2,78	123,22	31 377.970	1,78	1.729.847.406
Ingresos no financieros (1/7)	27.367.663.000	14.150.000	27.381.813.000	28.565.266.068	45,02	104,32	17.208 064 375	60,24	11.357.201 693
Ingresos financieros (8/9)	12.613.682.000	25.099.324.261	37.713.006.261	34 888.832.594	54,98	92,51	30.497 988.295	87,41	4 390.844 299
Ingr. ejerc. corriente (1/9)	39.981.345.000	25.113.474.261	65.094.819.261	63.454.098.662	100,00	97,48	47.706.052.670	75,18	15.748.045.992

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 1989									
CONCEPTO	PREVISION INICIAL (1)	PREVISION MODIFIC. (2)	PREVISION DEFINITIVA (3)=(1)+/-(2)	OBLIGACIONES LIQUIDADAS (4)	ESTRUCT CONTRDO %	NIVEL CUMPL PLIM.PTO %	PAGOS LIQUIDOS (5)	NIVEL EJEC. CONTRDO %	PENDIENTE (6) = (4)-(5)
CAP.0 Resultas	13.584.661.026	0	13.584.661.026	10.824.508.892		79,68	10.594.792.496	97,88	229.716.396
OPERACIONES CORRIENTES (1/4)									
CAP.1 Retribuc.personal	11.069.129.000	(360.585.657)	10.708.543.343	10.154.332.885	24,63	94,82	10.080.402.108	99,27	73.930.777
CAP.2 Compra bienes y serv.	7.355.902.000	516.118.123	7.872.020.123	6.144.301.333	14,90	78,05	5.771.807.529	93,94	372.493.804
CAP.3 Intereses	4.041.276.000	(554.068.000)	3.487.208.000	2.643.819.860	6,41	75,81	2.643 712 498	100,00	107.362
CAP.4 Transferencias	1.688.872.000	433.894.773	2.122.766.773	1 847.689 154	4,48	87,04	1 783 395 978	96,52	64.293.176
OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)									
CAP.6 Inversiones reales	13 205.168 000	(53.577.190)	13 151 590.810	4 715 693 965	11,44	35 86	4 014 491 106	85,13	701 202 859
CAP.7 Transferencias	1 284.500.000	32.080.439	1 316 580 439	439 173 897	1,07	33,36	404 108 895	92,02	35 065 002
OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)									
CAP.8 Variac.activos financ.	0	312 181 111	312 181 111	312 181 111	0,76	100 00	311 781 111	99 87	400 000
CAP.9 Variac.pasivos financ.	1 336.498.000	24 787.430.662	26 123 928 662	14 969 881 289	36,31	57,30	14 968 393 882	99,99	1 487 407
TOTAL GASTOS (0/9)	53 566.006.026	25 113.474 261	78 679.480 287	52 051 582 386	100	66,16	50 572 885 603	97,16	1 478 696 783
Gastos Ctes. u Ordinar. (1/4)	24 155.179.000	35 359 239	24 190 538 239	20 790 143 232	50 43	85 94	20 279 318 113	97,54	510 825 119
Gastos de Capital (6/7)	14 489.668 000	(21.496.751)	14 468 171.249	5 154.867.862	12,50	35,63	4 418 600 001	85,72	736 267 861
Gastos no financieros (1/7)	38.644.847.000	13.862.488	38.658.709.488	25.945.011.094	62,93	67,11	24 697.918.114	95,19	1.247.092.980
Gastos Financieros (8/9)	1.336.498.000	25.099.611.773	26.436.109.773	15.282.062.400	37,07	57,81	15.280.174 993	99,99	1.887.407
Gastos ejerc. corriente (1/9)	39.981.345.000	25.113.474.261	65.094.819.261	41.227.073 494	100,00	63,33	39 978.093.107	96,97	1.248.980.387

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 1990

CONCEPTO	PREVISION INICIAL (1)	PREVISION MODIFIC. (2)	PREVISION DEFINITIVA (3)=(1)+/-(2)	DERECHOS LIQUIDADOS (4)	ESTRUCT CONTRDO %	NIVEL CUMPL PLIM.PTO %	RECAUD. LIQUIDA (5)	NIVEL EJEC. CONTRDO %	PENDIENTE (6) = (4)-(5)
CAP.0 Resultas	25.176.210.548		25.176.210.548	23.912.724.501		94,98	17.175.716.277	71,83	6.737.008.224
OPERACIONES CORRIENTES (1/5)									
CAP.1 Imp.directos	10.572.900.000		10.572.900.000	11.105.015.247	20,50	105,03	7.811.114.435	70,34	3.293.900.812
CAP.2 Imp.indirectos	1.215.610.000		1.215.610.000	1.071.177.200	1,98	88,12	240.457.111	22,45	830.720.089
CAP.3 Tasas y otros	7.831.260.000		7.831.260.000	6.741.749.154	12,44	86,09	5.275.050.066	78,24	1.466.699.088
CAP.4 Transferencias	8.707.500.000	104.389.469	8.811.889.469	9.318.965.208	17,20	105,75	8.376.866.812	89,89	942.098.396
CAP.5 Ingr.patrim.	132.188.000		132.188.000	141.847.551	0,26	107,31	103.018.921	72,63	38.828.630
OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)									
CAP.6 Enaj.invers.reales	3.550.000.000		3.550.000.000	3.023.854.041	5,58	85,18	66 132 041	2,19	2.957.722.000
CAP.7 Transferencias	966.690.000		966.690.000	964.180.000	1,78	99,74	550.000.000	57,04	414.180.000
OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)									
CAP.8 Variac.activos financ.	2.500.000	300.000.000	302.500.000	289.055 482	0,53	95,56	89 954 203	31,12	199.101.279
CAP.9 Variac.pasivos financ.	9.958.983.000	11.563.862.891	21.522.845.891	21.522.845.891	39,73	100,00	15.680.247.258	72,85	5.842.598.633
TOTAL INGRESOS (0/9)	68.113.841.548	11.968.252.360	80.082.093.908	78.091.414.275	100	97,51	55.368.557.124	70,90	22.722.857.151
Ingresos tributarios (1/3)	19.619.770.000	0	19.619.770.000	18.917.941.601	35	96,42	13.326 621.612	70,44	5.591.319.989
Ingresos Ctes. u Ordin. (1/5)	28.459.458.000	104.389.469	28.563.847.469	28.378.754.360	52,38	99,35	21.806.507.345	76,84	6.572.247.015
Ingresos de Capital (6/7)	4.516.690.000	0	4.516.690.000	3.988.034.041	7,36	88,30	616.132.041	15,45	3.371.902.000
Ingresos no financieros (1/7)	32.976.148.000	104.389.469	33.080 537.469	32.366.788.401	59,74	97,84	22.422.639.386	69,28	9.944 149.015
Ingresos financieros (8/9)	9.961 483.000	11.863 862.891	21.825.345 891	21.811.901 373	40,26	99,94	15.770.201 461	72,30	6.041.699.912
Ingr. ejerc. corriente (1/9)	42.937.631.000	11.968.252.360	54 905.883.360	54 178.689.774	100,00	98,68	38.192 840 847	70,49	15 985 848 927

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 1990									
CONCEPTO	PREVISION INICIAL (1)	MODIFIC. (2)	PREVISION DEFINITIVA (3)=(1)+/-(2)	OBLIGACIONES LIQUIDADAS (4)	ESTRUCT CONTRDO %	NIVEL CUMPL. PLIM.PTO %	PAGOS LIQUIDOS (5)	NIVEL EJEC. CONTRDO %	PENDIENTE (6) = (4)-(5)
CAP.0 Resultas	25.250.045.194		25.250.045.194	20.332.125.416		80,52	19.500.987.116	95,91	831.138.300
OPERACIONES CORRIENTES (1/4)									
CAP.1 Retribuc.personal	11.926.011.000	262.795.578	12.188.806.578	11.603.977.593	35,12	95,20	11.583.707.099	99,83	20.270.494
CAP.2 Compra bienes y serv.	9.607.795.000	691.376.333	10.299.171.333	8.305.228.601	25,14	80,64	7.367.055.551	88,70	938.173.050
CAP.3 Intereses	4.536.056.000	(202.750.000)	4.333.306.000	3.847.620.245	11,65	88,79	3.847.088.303	99,99	531.942
CAP.4 Transferencias	1.633.955.000	158.143.406	1.792.098.406	1.392.069.523	4,21	77,68	1.281.399.934	92,05	110.669.589
OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)									
CAP.6 Inversiones reales	11.615.967.000	1.395.340.630	13.011.307.630	4.900.776.499	14,83	37,67	3 990 448 857	81,42	910 327 642
CAP.7 Transferencias	1.518.500.000	108.346.413	1.626.846:413	731.080.744	2,21	44,94	660 764 529	90,38	70 316 215
OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)									
CAP.8 Variac.activos financ.	1.000	" 322.000.000	322.001.000	306 555 482	0,93	95,20	297 935 482	97,19	8 620 000
CAP.9 Variac.pasivos financ.	2.099.346.000	9.233.000.000	11.332.346.000	1 951.351 945	5,91	17,22	1 929 075 422	98,86	22.276.523
TOTAL GASTOS (0/9)	68.187.676.194	11.968.252.360	80.155.928.554	53.370.786 048	100	66,58	50.458 462.293	94,54	2.912.323.755
Gastos Ctes. u Ordinar. (1/4)	27.703.817.000	909.565.317	28.613.382.317	25.148.895 962	76,12	87,89	24 079.250 887	95,75	1 069.645 075
Gastos de Capital (6/7)	13.134.467.000	1.503.687.043	14.638.154.043	5 631.857 243	17,05	38,47	4 651 213.386	82,59	980.643 857
Gastos no financieros (1/7)	40.838.284.000	2.413.252.360	43.251.536.360	30.780.753 205	93,17	71,17	28.730.464.273	93,34	2 050.288.932
Gastos Financieros (8/9)	2.099.347.000	9.555.000.000	11.654.347.000	2 257.907.427	6,83	19,37	2 227.010 904	98,63	30.896.523
Gastos ejerc. corriente (1/9)	42.937.631.000	11.968.252.360	54.905.883.360	33.038 660 632	100,00	60,17	30 957.475.177	93,70	2.081.185 455

Ayuntamiento de Zaragoza Anexo número 2

Período: 1988-1990

Evolución de los préstamos vivos y avales concedidos según los datos de la Cuenta de Administración del Patrimonio, (ajustados).

Préstamo-Entidad Financiera	Pendte. Amort. 1-1-88	Variaciones		Pendte. Amortiz. 31-12-88	Variaciones		Pendte. Amortiz. 31-12-89	Variaciones		Pendte. Amortiz. 31-12-90
		Aumentos	Amortización		Aumentos	Amortización		Aumentos	Amortización	
Empréstitos										
Del año 1957	16 819 000		809 000	16 010 000		846 000	15 164 000		883 500	14 280 500
Del año 1981	800 000 000		200 000 000	600 000 000		200 000 000	400 000 000		200 000 000	200 000 000
Del año 1985	1 378 377 233		73 259 125	1 305 118 108		83 152 000	1 221 966 108		94 312 950	1 127 653 158
Del año 1986	2 428 850 000			2 428 850 000		97 106 000	2 331 744 000		194 364 000	2 137 380 000
Préstamos										
Concertados con Banco de Crédito Local	2 508 887 894		242 223 937	2 566 663 957		265 318 104	2 301 345 853		286 375 613	2 014 970 240
Concertado con C A I 74/12	60 000 000		20 000 000	40 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	
Concertado con CAIXA 658-605	2 000 000 000			2 000 000 000		2 000 000 000				
Cta. Cte. C.A.I. 94-71	1 166 666 667		116 666 667	1 050 000 000		1 050 000 000				
Cta. Cte. Ibercaja 111781	1 318 675 000			1 318 675 000		1 318 675 000				
Cta. Cte. Ibercaja 111616	2 800 000 000		300 000 000	2 500 000 000		2 500 000 000				
Cta. Cte. Ibercaja 116476		2 000 000 000		2 000 000 000		2 000 000 000				
Cta. Cte. Bco. Central 8589029A		4 185 000 000		4 185 000 000		4 185 000 000				
Cta. Cte C.A.I. s/n 65203					750 000 000		750 000 000			750 000 000
Cta. Cte. CAIXA s/n 00490063					2 000 000 000		2 000 000 000			2 000 000 000
Concertados B.C.L. 62 19971 0					2 100 000 000		2 100 000 000	900 000 000		3 000 000 000
Concertado B.C.L. 72 19971 1					1 400 000 000		1 400 000 000	600 000 000		2 000 000 000
Concertado C.A.I. s/n 8-63					750 000 000		750 000 000			750 000 000
Concertado Bco. Central 8589029A					12 687 008 333		12 687 008 333		925 107 784	11 761 900 549
Concertado Bco. Santander 568 001								1 000 000 000		1 000 000 000
Concertado B.C.L.								7 000 000 000		7 000 000 000
Cte. Cte. C.A.I. 710000705-14								1 000 000 000		1 000 000 000
Empréstitos y Préstamos	14 778 275 794	6 185 000 000	952 958 729	20 010 317 065	19 687 008 333	13 720 097 104	25 977 228 294	10 500 000 000	1 721 043 847	34 756 184 447
Suma y sigue	14 778 275 794	6 185 000 000	952 958 729	20 010 317 065	19 687 008 333	13 720 097 104	25 977 228 294	10 500 000 000	1 721 043 847	34 756 184 447

Préstamo-Entidad Financiera	Pendte. Amort. 1-1-88	Variaciones		Pendte. Amortiz. 31-12-88	Variaciones		Pendte. Amortiz. 31-12-89	Variaciones		Pendte. Amortiz. 31-12-90
		Aumentos	Amortización		Aumentos	Amortización		Aumentos	Amortización	
Suma anterior	14 778 275 794	6 185 000 000	952 958 729	20 010 317 065	19 687 008 333	13 720 097 104	25 977 228 294	10 500 000 000	1 721 043 847	34 756 184 447
Avales										
Diputación Gral de Aragón (17-11-1988)		230 166 296		230 166 296			230 166 296			230 166 296
Diputación Gral de Aragón (18-05-1989)					353 964 820		353 964 820			353 964 820
Diputación Gral de Aragón (07-06-1990)								585 698 735		585 698 735
Ibercaja 18-02-1988		350 000 000								
Ibercaja (57223) 29-06-1990								8 145 000		8 145 000
Ibercaja (57224) 29-06-1990								29 865 000		29 865 000
Ibercaja (57379) 29-06-1990								14 363 736		14 363 736
Ibercaja (57546) 29-06-1990								50 151 524		50 151 524
Ibercaja (57444) 29-06-1990								40 044 934		40 044 934
Ibercaja (57380) 29-06-1990								6 749 000		6 749 000
Ibercaja (57381) 29-06-1990								47 423 802		47 423 802
Ibercaja (57545) 29-06-1990								58 084 133		58 084 133
Caja Rural Alto Aragón (65850-12) *								10 252 903		10 252 903
Caja Rural Alto Aragón (66335-39) *								12 311 614		12 311 614
Caja Rural Alto Aragón (66334-26) *								30 665 537		30 665 537
Caja Rural Alto Aragón (s/n) *								7 642 950		7 642 950
Caja Rural Alto Aragón (67835-93) *								29 426 674		29 426 674
Caja Rural Alto Aragón (67834-80) *								9 657 052		9 657 052
Caja Rural Alto Aragón (s/n) *								6 608 080		6 608 080
Caja Rural Alto Aragón (s/n) *								7 764 556		7 764 556
Bco. Hipotecario España (2693090004)								352 810 000		352 810 000
Bco. Hipotecario España (2693070006)								444 000 000		444 000 000
Bco. Hipotecario España (2734250000)								352 810 000		352 810 000
Avales		580 166 296		230 166 296	353 964 820		584 131 116	2 104 475 230		3 038 606 346
Total	14 778 275 794	6 765 166 296	952 958 729	20 240 483 361	20 040 973 153	13 720 097 104	26 561 359 410	12 604 475 230	1 721 043 847	37 794 790 793

Anexo número 3

Ayuntamiento de Zaragoza

Período: 1988-1990

Relación de las subvenciones y transferencias recibidas clasificadas por finalidad

	IMPORTE NETO DE LAS SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				% DE VARIACION			
FINALIDAD	1988	1989	1990	TOTAL	% 1989 S/1988	% 1990 S/1989	% 1990 S/1988	% SOBRE TOTAL
CULTURAL	123.460.120	63.677.731	48.757.796	235.895.647	-48,42%	-23,43%	-60,51%	13,30%
SOCIAL	28.331.982	100.085.113	46.714.530	175 131 625	253,26%	-53,33%	64,88%	9,88%
ACTIVIDADES JUVENILES	3.375.000	5.658.481	17.978.353	27 011 834	67,66%	217,72%	432,69%	1,52%
SANITARIA	6.812.500	7.835.485	14.300.000	28 947 985	15,02%	82,50%	109,91%	-1,63%
TRANSPORTE	0	329.080.722	165 123.457	494 204 179	100,00%	-49,82%	100,00%	27,87%
OBRAS	26.874.042	216.442.788	565.817.840	809 134 670	705,40%	161,42%	2005,44%	45,63%
OTROS	1.530.000	1.500.000	0	3.030 000	-1,96%	-100,00%	-100,00%	0,17%
TOTAL SUBV.AFECTADAS.-	190.383.644	724.280.320	858 691.976	1 773 355 940	280,43%	18,56%	351,03%	100,00%
F.N.C.M.	6.269.125.451	7.770.703.976	9 697.977.787	23 737 807.214	23,95%	24,80%	54,69%	93,05%
TOTAL SUBV. Y TRANS.-	6.459.509.095	8.494.984.296	10 556.669.763	25.511 163.154	31,51%	24,27%	63,43%	

Anexo número 4

Ayuntamiento de Zaragoza
Período: 1988-1990
Relación de subvenciones concedidas por la Corporación clasificadas según finalidad

	TOTAL OBLIGACIONES LIQUIDADAS				% DE VARIACIONES			
A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
FINALIDAD	1988 (1)	1989	1990 (2)	TOTAL	% 1989 S/1988	% 1990 S/1989	% 1990 S/1988	% SOBRE TOTAL
SOCIAL	48.308.014	166.599.394	198.186.015	413.093.423	244,87%	18,96%	310,25%	8,66%
DEPORTIVA	70.543.527	30.979.016	166.842.487	268.365.030	-56,09%	438,57%	136,51%	5,63%
CULTURAL	90.204.705	35.099.289	93.009.097	218.313.091	-61,09%	164,99%	3,11%	4,58%
BENEFICA	68.748.610	71.635.574	72.933.597	213.317.781	4,20%	1,81%	6,09%	4,47%
OTROS FINES	54.227.725	47.290.453	60.229.640	161.747.818	-12,79%	27,36%	11,07%	3,39%
T.OBRAS	0	50.000.000	12.000.000	62.000.000	100,00%	-76,00%	100,00%	1,30%
TOTAL SUBV.CONT C.4.-	332.032.581	401.603.726	603.200.836	1.336.837.143	20,95%	50,20%	81,67%	28,02%
TRANSFERENCIAS/CORR	493.680.000	677.153.296	874.256.406	2.045.089.702	37,16%	29,11%	77,09%	42,87%
TOTAL SUBV.Y TRANSF.-	825.712.581	1.078.757.022	1.477.457.242	3.381.926.845	30,65%	36,96%	78,93%	70,90%
NO SUBVENCION	544.632.406	768.932.132	74.745.851	1.388.310.389	41,18%	-90,28%	-86,28%	29,10%
TOTAL CAPITULO 4.-	1.370.344.987	1.847.689.154	1.552.203.093	4.770.237.234	34,83%	-15,99%	13,27%	100,00%
B) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
DEPORTIVA	64.917.112	0	0	64.917.112	-100,00%	0,00%	-100,00%	3,34%
CULTURAL	8.863.024	19.372.533	60.748.751	88.984.308	118,58%	213,58%	585,42%	4,58%
OTROS FINES	4.000.000	0	0	4.000.000	-100,00%	0,00%	-100,00%	0,21%
T.OBRAS	235.000.000	419.801.364	135.003.429	789.804.793	78,64%	-67,84%	-42,55%	40,68%
TOTAL.-	312.780.136	439.173.897	195.752.180	947.706.213	40,41%	-55,43%	-37,42%	48,81%
TRANSFERENCIAS/CAP	0	0	994.000.000	994.000.000	0,00%	100,00%	100,00%	51,19%
TOTAL CAPITULO 7.-	312.780.136	439.173.897	1.189.752.180	1.941.706.213	40,41%	170,91%	280,38%	100,00%

NOTAS: Las transferencias corrientes se realizan a favor de los Patronatos Municipales.

Las transferencias de capital, son efectuadas a la Sociedad Municipal de la Vivienda, S.L..

(1) Deducidas las bajas aprobadas que ascienden a un 6,99 % para el Cap. 4 y a un 12,17 % para el Cap. 7, los dos porcentajes sobre el contraido inicial.

(2) Incluyen los créditos incorporados del ejercicio 1989, contabilizados en Resultas.

Anexo número 5

Ayuntamiento de Zaragoza
Período: 1988-1990
Evolución del inventario de bienes.

EPÍGRAFES	1-1-1988	VARIACIONES	31-12-1988	VARIACIONES	31-12-89	VARIACIONES	31-12-1990
I.- INMUEBLES:	9.847.596.504	+815.648.384 -3.630.427	10.659.614.461	+371.150.031 +86.327.435 -7.951.438	11.109.140.489	+1.552.234.300 -940.504.147	11.720.870.642
II.- DERECHOS REALES:	25.855.864	+2.681.859	28.537.723	+10.226.228 -42.295	38.721.656	+11.071.366	49.793.022
III.- MUEBLES HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS:	21.858.660	+2.520.000	24.378.660	+6.185.000	30.563.660	+9.374.000	39.937.660
IV.- VALORES MOBILIARIOS:	489.583.462	+250.338.038	739.921.500	....	739.921.500	---	739.921.500
V.- VEHÍCULOS:	795.291.000	+163.188.016 -10.840.000	947.639.016	+114.481.290 -13.610.000	1.048.510.306	+56.148.090 -17.069.253	1.087.589.143
VI.- SEMOVIENTES:	3.626.948	+1.999.981 -362.695	5.264.234	+2.399.840 -526.423	7.137.651	+713.766	6.423.885
VII.- MUEBLES:	2.432.973.801	+64.546.316 -1.014.000	2.496.506.117	+93.552.251 -5.541.349	2.584.517.019	+87.427.512 -2.568.000	2.669.376.531
VIII.- BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES:	....	....	....	....	....	---	---
TOTALES :	13.616.786.239	+1.285.075.472	14.901.861.711	+656.650.570	15.558.512.281	+755.400.072	16.313.912.383

Anexo número 6

Ayuntamiento de Zaragoza

Período: 1988-1990

Resúmen de los costes e ingresos de los Servicios públicos municipales

Datos obtenidos de las liquidaciones presupuestarias sobre los costes e ingresos de los Servicios Públicos Municipales en los ejercicios de 1988/90.

a) **Servicios con contraprestación económica**

Cementerios			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Ingresos	182.094	182.218	202.151
- Costes	243.587	284.163	480.375
Déficits -diferencia de explotación-	(61.493)	(101.945)	(278.224)
- Porcentaje del coste cubierto con ingresos	75 %	64 %	42 %

Recogida de residuos sólidos urbanos			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Ingresos	720.853	610.136	782.780
- Costes	1.239.358	1.451.713	1.480.665
Déficits -diferencia de explotación-	(518.505)	(841.577)	(697.885)
- Porcentaje del coste cubierto con ingresos	58 %	42 %	53 %

Abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Ingresos	2.162.279	2.319.838	2.726.404
- Costes	2.229.365	2.441.632	2.992.782
Déficits -diferencia de explotación-	(67.086)	(121.794)	(266.378)
- Porcentaje del coste cubierto con ingresos	97 %	95 %	91 %

Mercados			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Ingresos	36.995	33.013	32.289
- Costes	47.437	52.245	59.382
Déficits -diferencia de explotación-	(10.442)	(19.232)	(27.093)
- Porcentaje del coste cubierto con ingresos	78 %	63 %	54 %

Prevención y extinción de incendios			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Ingresos	3.526	37.941	37.152
- Costes	1.222.196	1.354.955	1.464.166
Déficits -diferencia de explotación-	(1.218.670)	(1.317.014)	(1.427.014)
- Porcentaje del coste cubierto con ingresos	---	---	2,5 %

Instalaciones deportivas			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Ingresos	144.894	148.636	191.517
- Costes	664.163	716.326	976.860
Déficits -diferencia de explotación-	(519.269)	(576.690)	(785.343)
- Porcentaje del coste cubierto con ingresos	22 %	21 %	20 %

[1] Transporte colectivo de viajeros			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Ingresos	---	---	---
- Costes	611.936	586.439	1.543.413
Déficits -diferencia de explotación-	(611.936)	(586.439)	(1.543.413)
- Porcentaje del coste cubierto con ingresos	0	0	0

[1] Se figura como coste la aportación del Ayuntamiento a la Empresa concesionaria del Servicio de acuerdo con el Convenio suscrito.

b) **Servicios sin contraprestación económica**

Alumbrado público (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	526.586	566.053	589.134
- Gastos de capital (Inversiones)	113.755	151.509	216.334
Totales	640.341	717.562	805.468

Limpieza viaria (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	1.110.735	1.217.766	1.203.876
- Gastos de capital (Inversiones)	----	4.990	5.500
Totales	1.110.735	1.222.756	1.209.376

Acceso a núcleos de población y pavimentación de vías públicas (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	983.982	1.117.710	1.194.341
- Gastos de capital (Inversiones)	1.710.224	6.028.823	5.993.717
Totales	2.694.206	7.146.533	7.188.058

Control de alimentos y bebidas (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	181.998	208.081	213.638
- Gastos de capital (Inversiones)	1.974	28.499	1.500
Totales	183.972	236.580	215.138

Bibliotecas públicas (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	29.949	43.579	52.441
- Gastos de capital (Inversiones)	---	—	**9.596**
Totales	29.949	43.579	**62.037**

Parques y Járdines publicos (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	494.710	559.536	599.851
- Gastos de capital (Inversiones)	194.305	396.080	302.970
Totales	689.015	955.616	902.821

Tratamiento de residuos sólidos (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	158.211	193.173	204.121
- Gastos de capital (Inversiones)	---	15.400	---
Totales	158.211	208.573	204.121

Protección civil (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	20.945	26.468	32.844
- Gastos de capital (Inversiones)	---	8.350	2.376
Totales	20.945	34.818	35.220

Servicios sociales (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	1.089.601	1.304.376	1.515.350
- Gastos de capital (Inversiones)	85.092	312.237	261.317
Totales	1.174.693	1.616.613	1.776.667

Protección del medio ambiente (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	165.719	169.591	191.596
- Gastos de capital (Inversiones)	153.846	284.402	91.999
Totales	319.565	453.993	283.595

Vigilancia pública (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	2.253.254	2.550.492	2.748.213
- Gastos de capital (Inversiones)	89.468	288.611	60.698
Totales	2.342.722	2.839.103	2.808.911

Educación preescolar y Educación General Básica (en miles de pesetas)			
Concepto	Año 1988	Año 1989	Año 1990
- Gastos corrientes	1.107.187	1.070.957	1.503.584
- Gastos de capital (Inversiones)	105.981	818.692	648.573
Totales	1.213.168	1.889.649	2.152.157

Anexo número 7

Ayuntamiento de Zaragoza
Período: 1988-1990
Actuaciones urbanísticas analizadas

a) **Planes parciales**

Suelo urbanizable programado. Aprobados en 88-90: 11 - Muestra: 3 - 27,27 por ciento.

1. Expediente 3.093.043/88. Plan Parcial Sector 57-58 PGOU.
Aprobación del Ayuntamiento Pleno inicial (21-2-89), provisional (28-2-90) y definitiva (26-7-90).
Aprobada la constitución de la Junta de Compensación y sus Estatutos Pendiente de presentar el proyecto de compensación.

2. Expediente 3.009.009/89. Plan parcial Area 60. Aprobación plenaria inicial (18-5-89) y definitiva (29-6-90).
Proyecto de compensación aprobado por Consejo de Gerencia el 28-1-93.
La Junta de Compensación aprobó el proyecto aplicándose el 15 por ciento de aprovechamiento medio a favor de la Corporación en virtud del artículo 16 de la Ley 8/1990, de 25 de julio. Este aprovechamiento medio, evaluado en 234.348.159 pesetas, equivalente a 38,7 viviendas unifamiliares, ha sido recurrido por la Junta de Compensación.

3. Expediente 3.112.446/88. Proyecto de compensación Polígono 20 ACTUR.
No ha sido localizado el expediente completo. De los documentos examinados se deduce que:

- El Plan Parcial fue aprobado en sesiones plenarias del 18-5-89 (inicial) y 29-6-90 (definitiva).
- El aprovechamiento medio del 10 por ciento sobre dos parcelas de 2.596 metros cuadrados y 4.370 metros cuadrados representa 3.115,20 metros cuadrados/metro cuadrado y 5.244 metros cuadrados/metro cuadrado, respectivamente.

ALEGACIONES

Delegación del Gobierno en Aragón
Plaza Nuestra Sra. del Pilar, s/n.
50071 Zaragoza
Teléfono (976) 39 29 00
Fax (976) 39 48 44
39 49 53

Referencia: REGISTRO GENERAL
L.P.A.

TRIBUNAL DE CUENTAS 2217/3 21 OCT. 1993 ENTRADA

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ARAGON 15.10.93 034222 SALIDA

Conforme establece el artículo 38 de la Ley 30/92 del 26-11-92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, le remito el escrito presentado en esta Delegación del Gobierno el día 14.10.1993 por los administrados que a continuación se relacionan:

063517 AYUNTAMIENTO

Zaragoza, 15 de Octubre de 1.993

EL SECRETARIO GENERAL.
P.D. EL VICESECRETARIO GENERAL.

Fdo.: MIGUEL IRIBAS BENUA

TRIBUNAL DE CUENTAS
C/ Fuencarral, 81
28071 MADRID

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a) y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 9.1., 11.b), 12 y 14.1 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, en especial los artículos 27, 28.1., 31.b) y d), 34, 41 y 44 de dicha Ley, en relación con los resultados de la fiscalización realizada al Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas), referida a los años 1988 y 1989, **HA ACORDADO**, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1993, **APROBAR** el presente informe y su **ELEVACION**

A LAS CORTES GENERALES

INFORME DE LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE (LAS PALMAS) EJERCICIOS 1988 Y 1989

S U M A R I O

1. INTRODUCCION
2. NORMATIVA APLICABLE
3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO
4. PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS
5. INGRESOS
6. GASTOS
7. PATRIMONIO
8. SERVICIOS MUNICIPALES Y URBANISMO
9. ACTIVIDAD CONTRACTUAL
10. ENTES CON PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO
11. TRAMITE DE AUDIENCIA
12. CONCLUSIONES
13. RECOMENDACIONES
ANEXOS

PRESENTACION DEL INFORME

El presente procedimiento fiscalizador se ha realizado en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno de este Tribunal, en sesión de 30 de marzo de 1992, como consecuencia de su inclusión en el programa anual de las actuaciones a iniciar en dicho ejercicio.

La fiscalización se extiende a los años 1988 y 1989.

El Ayuntamiento de Teguise cuenta con una población de 8.155 habitantes por lo que demográficamente se encuentra situado en el estrato inferior de los municipios grandes. Es de destacar el gran volumen de fondos presupuestarios que administra, en relación con la población señalada, pues los derechos liquidados en 1989 se elevaron a 4.197 millones de pesetas.

En relación con la actividad económica municipal, hay que destacar la elevada importancia del componente turístico de este Ayuntamiento, con las grandes repercusiones urbanísticas y financieras que este hecho ha comportado.

En su relación con los administrados, el Ayuntamiento, como otras de características turísticas análogas, ha tenido problemas derivados de la exacción del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. La Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, ha venido a dar solución a determinados conflictos creados con los contribuyentes, en especial cuando estos eran grandes entidades mercantiles, al eliminar la consideración de las "mejoras permanentes realizadas" previstas en la normativa anterior.

Con carácter general, se puede destacar la gran debilidad del control interno existente en la Corporación, así como la falta de rendición y consiguiente aprobación de las Cuentas Generales de Presupuesto y de Administración de Patrimonio.

El proyecto de Informe se articula en trece apartados, divididos en tres partes:

La primera consiste en una introducción, en la que se recogen aspectos generales del Municipio, objetivos de la fiscalización, organización de la Corporación y normativa aplicable al periodo fiscalizado.

En los apartados tres al diez, se exponen las actuaciones desarrolladas para la evaluación del control interno y para la fiscalización de las materias presupuestarias y contables del Municipio, recogiéndose los resultados de las comprobaciones realizadas, con referencia a los resultados de la situación patrimonial, Servicios municipales y urbanismo, así como a los procedimientos contractuales tramitados.

Finalmente, los apartados once a trece recogen el trámite de las alegaciones, las conclusiones del informe, con la reseña de los aspectos más destacados de las anomalías encontradas, y las recomendaciones que se proponen a la Corporación.

Las actuaciones practicadas se pusieron en conocimiento del Alcalde con fecha de 1 de octubre de 1993 en trámite de audiencia, no habiéndose recibido alegaciones de la Corporación al mencionado documento.

Las actas del Pleno muestran que, con anterioridad a la aprobación del ejercicio de las actividades económicas por parte del Ayuntamiento e, incluso, a la redacción de la Memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero, señalada en el artículo 97, del Real Decreto Legislativo 781/1986, la Corporación había iniciado la realización de las siguientes inversiones: a) Fábrica de Queso; b) Fábrica de Rojo Carmín; c) Naves Industriales para el Complejo Industrial Agrícola y d) Suministros diversos.

Las inversiones aprobadas, previas a la constitución de la sociedad, de las que se tienen antecedentes parciales de información, ascienden a un total de 432,45 millones de pesetas.

De las comprobaciones realizadas por este Tribunal resulta:

a) Se aprueban inversiones y gastos sin la previa realización de un estudio de su rentabilidad, viabilidad y oportunidad futuras.

b) Dado que el Municipio inicia actividades que superan su marco tradicional de actuación y que por otra parte, todas estas actuaciones empresariales tienen normalmente incidencias de carácter supramunicipal, hubiera sido procedente efectuar un estudio de adecuación de medios a fines.

11. TRAMITE DE AUDIENCIA

En cumplimiento de los establecido en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se enviaron al Ayuntamiento de Teguise, con fecha uno de octubre de 1993, las actuaciones practicadas en el presente procedimiento fiscalizador, con la finalidad de que fuesen emitidas cuantas alegaciones a las mismas se estimasen procedentes.

Transcurrido el plazo establecido para este trámite de audiencia, no se ha recibido comunicación del Ayuntamiento sobre esta materia ni petición de prórroga del mismo.

12. CONCLUSIONES

a) El sistema de control interno de la Corporación presenta numerosas debilidades y puntos de ruptura en su funcionamiento. De los resultados de las pruebas efectuadas se deduce que no cumple los objetivos que le son propios.

b) Los Presupuestos anuales se aprueban con retraso, en relación con los plazos legales. La documentación que se incorpora a su tramitación es incompleta, en relación con los requerimientos reglamentarios.

c) No se han aprobado, ni rendido, las Cuentas Generales de Presupuesto y de Administración del Patrimonio. La tramitación de la aprobación de las Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto ha sido irregular.

Las Cuentas de Tesorería y Recaudación presentan irregularidades sustanciales en su estructura y tramitación que determinan que éstas no puedan considerarse como tales Cuentas.

d) El grado de recaudación de determinados derechos liquidados fue, en ocasiones, muy reducido. En el año 1988 se recaudó un 14 por ciento de las resultas de ejercicios anteriores y un 51 por ciento de los ingresos por variación de activos financieros. En el año 1989 se recaudó el 29 por ciento de los ingresos por impuestos directos y el 40 por ciento de las resultas de ejercicios anteriores.

e) Los Servicios Municipales no disponen de aplicaciones contables auxiliares específicas para su control, por lo que no puede emitirse opinión sobre la razonabilidad de los resultados obtenidos por dichos servicios.

f) La actividad planificadora en urbanismo ha sido intensa, pero la Corporación carece de registros contables adecuados en los que consten los compromisos financieros contenidos en los diferentes planes de ordenación territorial, así como el grado de cumplimiento de los mismos.

g) La Corporación ha recepcionado obras públicas y ha adquirido bienes sin la tramitación previa de los contratos administrativos correspondientes.

En los casos en que se han tramitado contratos administrativos, se han registrado numerosas irregularidades e infracciones en la aplicación de su normativa reguladora.

h) La Corporación ha realizado inversiones elevadas en maquinaria, equipos e instalaciones con destino a la Empresa Municipal Agrícola y Marinera de Teguise, S.A., sin que conste la existencia de informes, estudios o memorias sobre la viabilidad técnica y económico-financiera de la misma y su previsible incidencia futura en el régimen de las finanzas corporativas.

13. RECOMENDACIONES

a) Se debe proceder a una revisión profunda del funcionamiento del sistema de control interno de la Corporación con objeto de mejorar su rendimiento actual, que es insatisfactorio.

b) Se debe cumplir estrictamente la normativa reguladora en materia presupuestaria y de rendición de las cuentas anuales.

c) Se debe prestar la máxima atención al desarrollo de la función recaudatoria, a fin de mejorar los rendimientos obtenidos en el periodo fiscalizado.

d) El sistema contable de la Corporación debe articularse de manera adecuada, con objeto de que permita la evaluación de los costes y rendimientos de los diferentes servicios municipales.

e) Los procedimientos contractuales administrativos deben aplicarse a todas las actuaciones contempladas por la normativa reguladora de aquellos, la cual debe ser cumplida con el máximo rigor.

f) Las inversiones cuya realización esté prevista por la Corporación deben ser objeto de un y riguroso estudio previo sobre sus resultados futuros, y su incidencia previsible en la hacienda municipal.

Madrid, 21 de diciembre de 1993

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Adolfo Carretero Pérez

INFORME DE LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE (LAS PALMAS), EJERCICIOS 1988 Y 1989

1. INTRODUCCION

1.1. *Cuestiones previas*

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en la sesión del 30 de marzo de 1992, acordó incluir en el Plan de actuaciones a iniciar durante el ejercicio citado el procedimiento fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Teguise, correspondiente a los años de 1988 y 1989, ambos incluidos.

El municipio de Teguise ocupa la zona central de la isla de Lanzarote y los cinco islotes (roques) que se ubican al norte de su costa (La Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y Roque del Oeste). La superficie del municipio es de 263,98 Km^2, de los cuales 52,99 km^2 corresponden a los islotes señalados.

El municipio comprende dieciséis núcleos de población (Villa Teguise, Tahiche, Nazaret, Las Caletas, Costa Teguise, Guatiza, El Mojón, Los Valles, Teseguite, La Caleta de Famara, Soo, Muñique, Tiagua, Mozaga, Tao y la Graciosa).

La Villa de Teguise fué la primera capital de la isla hasta su traslado a Arrecife. Este hecho, junto a las consecuencias de erupciones volcánicas y de plagas agrícolas, desencadenó una crisis continuada y un importante proceso de emigración de su población. Esta situación se prolongó hasta el año 1875. A partir de ese momento se ha venido produciendo un desarrollo turístico sostenido en la isla y particularmente creciente en el municipio de Teguise, hasta 1989, momento a partir del cual la actividad turística manifiesta una tendencia a la regresión. Aparte de la actividad turística, la pesca y la agricultura, en abandono, constituyen la base económica del municipio.

La población ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, pasando de 6.096 habitantes en 1380 a 8.155 habitantes en 1989.

1.2. *Objetivos de la fiscalización*

Como objetivos específicos de la presente fiscalización, se han fijado los siguientes:

a) La verificación de los estados contables, de rendición obligatoria, que registran la situación económico-financiera y patrimonial de la Corporación.

b) La comprobación del cumplimiento de la legalidad vigente en la actuación y gestión económico-financiera municipales.

c) El análisis de la gestión municipal, en especial de la Ordenación Territorial y del Urbanismo, así como de las Empresas y Servicios Municipales, a fin de evaluar las actuaciones realizadas.

Hay que señalar que la falta de rendición de las cuentas de la Corporación ha limitado los resultados de la fiscalización realizada, así como que no se ha dispuesto de información contable suficiente sobre los Servicios Municipales para emitir opinión sobre la razonabilidad de los resultados obtenidos por los citados Servicios

1.3. *Organización de la Corporación*

Durante el período fiscalizado, el Pleno municipal ha estado constituído por trece concejales. La Comisión de Gobierno que se constituyó el 7 de julio de 1987, estuvo formada por el Alcalde y cuatro concejales y su composición no sufrió alteraciones durante los años 1988 y 1989. La Corporación carece de Reglamento Orgánico específico.

Se nombraron Concejales Delegados en diez Servicios o Areas de actividad, con actuaciones a nivel interno, sin facultades de resolución en actos administrativos que afectan a intereses de terceros.

En el Pleno de la Corporación, celebrado el siete de julio de 1987, se constituyeron siete Comisiones Informativas con diversos cometidos, entre ellas, dos Comisiones de Hacienda, ambas presididas por el Alcalde, pero con diferente composición. No está reglamentado su régimen de sesiones, ni constan las actas de las mismas. Durante el período fiscalizado se constituyeron tres nuevas Comisiones Informativas y el 30 de junio de 1988 se modificó la composición de las ya existentes.

Se relacionan a continuación algunas de las Comisiones Informativas constituidas, dada su mayor incidencia en la actividad económico-financiera de la Corporación:

a) Comisión de Hacienda.

b) Comisión de Obras Públicas, Vivienda, Urbanismo, Turismo, Transportes y Comunicaciones.

c) Comisión de Agricultura, Aguas y Pesca.

d) Comisión Especial de Cuentas (de constitución preceptiva).

Al iniciar el período fiscalizado, la Corporación contaba con 29 funcionarios y un gran número de empleados contratados laborales dedicados fundamentalmente a realizar obras gestionadas por la Corporación que, en determinados momentos del período investigado, superaron los 400. No consta que se haya elaborado ni aprobado ningún organigrama de las funciones del personal municipal. Los puestos de Secretario y de Interventor los han desempeñado funcionarios habilitados accidentales, y el de Depositario, un Concejal.

En general, falta la definición de las competencias y atribuciones de los diferentes puestos de trabajo, así como la fijación de los cometidos específicos de los empleados contratados laborales.

2. NORMATIVA APLICABLE

La legislación aplicable durante el período fiscalizado se contiene fundamentalmente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. El régimen contable durante el período examinado, fue el previsto en la Instrucción de Contabilidad aprobada por Decreto de 4 de agosto de 1952.

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO

De los diversos análisis realizados en cada una de las áreas de actividad municipal se ha comprobado la inexistencia de actuación fiscalizadora propiamente dicha, tanto en

las transacciones corrientes, como en las de naturaleza patrimonial o financiera. En consecuencia, en las operaciones del período 1988 y 1989 no se ha realizado, en términos generales, una intervención previa ni posterior, que asegure la suficiencia presupuestaria, la competencia del órgano autorizante y la procedencia económica y legal de las citadas operaciones.

La Intervención municipal limita sus actuaciones a funciones de registro contable y de llevanza de los libros obligatorios y auxiliares, incluidos los propios de la Tesorería, de manera que los registros de ésta reproducen los de Intervención, sin que se genere, por lo tanto, el control cruzado que la segregación o diferenciación, prevista en la normativa contable, pretende conseguir de ambas funciones, la interventora y la de gestión de caudales.

Asimismo, al cierre de cada ejercicio se consideran, como ingresos y gastos pendientes de realización, las diferencias de créditos pendientes de aplicar, sin que estén efectivamente documentados por relaciones pormenorizadas de deudores y acreedores, dado que tales derechos y obligaciones no se han generado en términos presupuestarios. Se trata de simples previsiones de derechos a liquidar o de obligaciones a contraer.

La mayor parte de los ingresos municipales se obtienen a través de un recaudador independiente, quién también se encarga de la formación de los correspondientes padrones y de la consiguiente liquidación de tributos, salvo en el caso de la Contribución sobre Inmuebles, que se realiza por el Centro de Gestión Catastral. No consta, por parte de la Corporación, la aprobación ni la verificación de dichos padrones, ni tampoco de las liquidaciones tributarias correspondientes.

La Corporación no aprueba las bajas en cargos que efectúa el recaudador, ya que todo el procedimiento tramitado consiste en que el mismo ingresa mensualmente lo cobrado por los diferentes conceptos presupuestarios, con lo que la Intervención confecciona los mandamientos de ingreso y procede a su contabilización. La transferencia de ingresos a la Corporación no se produce de forma regular, sino a medida que se solicita por ésta, sin que se haya observado la existencia de comprobaciones efectivas y regulares de las cuentas bancarias restringidas de recaudación.

El Ayuntamiento, por su parte, liquida y recauda las licencias de obras, de apertura de establecimientos y otras tasas de menor entidad, con procedimientos diversos, específicos para cada tipo de ingreso.

Los derechos por licencias de obras son liquidados por la Oficina Técnica, que recauda una parte de ellos cuando concede la licencia y otros, con anterioridad a la concesión, bien en su totalidad o como anticipo a cuenta, sin que exista ningún criterio preestablecido sobre esta materia. En los procesos de recaudación de los ingresos gestionados por la Corporación no se ha observado la expedición de certificaciones de descubierto, ni que se siga el procedimiento de apremio para la ejecución de los mismos, cuando así proceda.

En las transacciones generadoras de gasto no se ha seguido un procedimiento normalizado para la gestión económica de las compras corrientes y de la recepción de los servicios prestados. No existe propuesta previa de adquisición, no consta la realización de publicidad o promoción de ofertas de proveedores, ni se formaliza la recepción y la prueba de conformidad con los bienes y servicios recibidos por parte de los responsables de la Corporación.

En los mandamientos de pago formalizados, coincide generalmente el momento del reconocimiento de la obligación con el del pago de la misma y están confeccionados, en ocasiones, con fecha posterior a dicho pago, produciéndose, en más de la mitad de los mandamientos comprobados, errores de imputación temporal (se contabilizan en un ejercicio los gastos de ejercicios anteriores) y de imputación presupuestaria (se asignan a capítulos y epígrafes indebidos los diferentes gastos).

En materia de gestión de personal se ha comprobado la inexistencia de procedimientos previos de selección para el acceso a la Corporación y de definición de la plantilla del personal laboral. Además, se registran como gastos en bienes y servicios o inversiones una parte de los imputables a personal. En el año 1988 se han imputado al capítulo 2 del presupuesto de gastos 1,98 millones de pesetas de gastos de personal y en el de 1989, un importe de 42,71 millones de pesetas.

No se elaboran Planes de Inversiones, ni existen previsiones que desarrollen los importes de las mismas consignados en los presupuestos.

No se sigue un procedimiento preestablecido para la adquisición, recepción, registro, conservación, protección y baja de los bienes que integran el Patrimonio Municipal. Debido a las deficiencias en la formación del Inventario Municipal y a la no rendición de las Cuentas de Administración del Patrimonio, la Corporación carece de un registro actualizado y fiable que defina sus activos, y se incumple el Real Decreto 137/86, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en lo referente a la elaboración del inventario y registro de bienes.

No se confeccionan previsiones de tesorería y de financiación. En la concertación de créditos con Entidades financieras no se siguen procedimientos uniformes, produciéndose cierta confusión sobre la naturaleza de las operaciones crediticias y las de tesorería, de forma que a veces las operaciones calificadas por la Corporación como de este último tipo, en realidad cubren financiación a largo plazo. Tampoco se sigue la situación crediticia, a través de los registros adecuados, con el fin de controlar los saldos pendientes, los intereses devengados, las amortizaciones efectuadas y demás información relevante.

Por último, no existen procesos uniformes de contratación, tanto en los órganos intervinientes como en los trámites, ni se ha formado el expediente de contratación correspondiente en numerosas adquisiciones de bienes y servicios, como se detalla más adelante.

4. PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

4.1. *De los Presupuestos*

Los presupuestos de 1988 y 1989 fueron aprobados, inicialmente, el 21 de enero de 1988 y el 29 de diciembre de 1988 y, con carácter definitivo, el 26 de febrero de 1988 y el 3 de febrero de 1989, respectivamente. En ambos expedientes presupuestarios no se ha incluido ni la relación de ingresos y de créditos anulados, ni las bases utilizadas para el cálculo de rendimientos de los recursos que se arbitran por primera vez. También falta el estado de costes de las actividades o servicios que se financian mediante tasas. Tanto la memoria de la Presidencia como la de la Intervención carecen de profundidad en su contenido. No se incluyen, como anexos, los Planes y programas de inversión y financiación de carácter anual o plurianual (artículo 443 del Real Decreto Ley 781/1986), de especial importancia en este municipio, por las numerosas inversiones reales que tuvieron lugar en el período fiscalizado.

Como referencia informativa, en el anexo número 1 a este informe figuran los datos presupuestarios correspondientes al período fiscalizado.

El presupuesto inicial, aprobado en 1988, ascendió a 1.780 millones de pesetas de ingresos y se incrementó durante el ejercicio en un 22 por ciento, financiándose este aumento principalmente con los capítulos 1 y 9 (Impuestos Directos y Variación de Pasivos Financieros, que representaron el 28,5 por ciento y el 61,6 por ciento de la variación, respectivamente).

El presupuesto inicial de ingresos de 1989 ascendió a 3.320 millones de pesetas, incrementándose durante el ejercicio en un 19 por ciento, cuya financiación se ha previsto de la forma siguiente:

Capítulo 1	Contribución Territorial Urbana	100.000.000 Pesetas
Capítulo 3	Licencias Urbanísticas	473.000.000 Pesetas
Capítulo 7	Transferencias de Entes Territoriales	60.000.000 Pesetas
TOTAL		633.000.000 Pesetas

La evolución presupuestaria en el período fué fuertemente creciente ya que en 1989, el Presupuesto definitivo de ingresos se incrementó en un 81,5 por ciento respecto al aprobado en el ejercicio anterior. Considerado desde la perspectiva de los derechos liquidados, se incrementó en un 89,1 por ciento. Los capítulos de mayor aumento fueron el 1 y el 3 (Impuestos Directos y Tasas), así como los ingresos de capital a percibir por medio de transferencias. La Contribución Territorial Urbana, las Plusvalías y las Licencias Urbanísticas son los conceptos con mayor crecimiento, lo que se explica, en parte, por las modificaciones introducidas en las correspondientes Ordenanzas y por la aplicación de nuevos valores catastrales, coincidiendo todo ello, como hacen pensar las modificaciones anteriores, con un momento de auge urbanístico en el término municipal. Destaca

el hecho de que, con la excepción del capítulo 3, los que experimentan mayor incremento con respecto al ejercicio anterior son los que obtienen peores resultados recaudatorios en el ejercicio corriente.

También es significativo el incremento experimentado por las operaciones de Tesorería concertadas en cada ejercicio que, siendo ya importantes en 1988, aumentan en un 60 por ciento en el ejercicio siguiente. Las dificultades de liquidez observadas en el último ejercicio podrían plantear problemas para el reembolso de los pasivos contraídos a su vencimiento.

En cuanto a los gastos, en el año 1989 las obligaciones reconocidas se incrementaron en un 95 por ciento respecto al ejercicio anterior. Los capítulos que registraron mayor crecimiento fueron los destinados a inversiones, con un 135 por ciento, y a gastos de personal, con un 132 por ciento (básicamente personal contratado y laboral).

El grado de ejecución presupuestaria fue mayor en 1989 que en 1988, alcanzándose el 99 por ciento de las previsiones en las obligaciones liquidadas, si bien el nivel de pago de las mismas fue mucho más bajo, el 64,5 por ciento, siendo los capítulos más afectados el 6 y el 9 (Inversiones reales y variación de pasivos financieros).

4.2. *De la contabilidad*

Se ha verificado la llevanza de los siguientes registros: a) Libro general de rentas y exacciones, b) Libro general de gastos, c) Diarios generales de intervención de ingresos y gastos, d) Libro de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP) y e) Libro de arqueos. Todos ellos se han formalizado manualmente, sin ningún tipo de tratamiento informático. Se ha comprobado en dichos registros la existencia de enmiendas y tachaduras, así como apuntes y modificaciones hechas a lápiz. Por otra parte, en algunos asientos se omite su numeración, el número identificador del mandamiento a que corresponde, la referencia del libro de Caja y, a veces, no se mantiene la correlación de fechas en los apuntes realizados en los libros.

Se ha comprobado la no llevanza del libro de inventarios y balances, que es obligatorio, según establece el artículo 457 del Real Decreto 781/1986, sobre Disposiciones de Régimen Local.

El procedimiento de registro contable no es uniforme, puesto que los ingresos y gastos se anotan, en unas ocasiones, siguiendo el principio de caja y, en otras, el de devengo.

4.3. *De la rendición de las cuentas anuales*

No constan expedientes de tramitación, ni de aprobación de las Cuentas Generales de Presupuestos de los ejercicios de 1988 y 1989, no dándose, por lo tanto, cumplimiento a lo establecido por el artículo 459 del Real Decreto 781/1986.

No se ha formulado el expediente de tramitación, ni ha tenido lugar la preceptiva aprobación de las Cuentas de Administración del Patrimonio de los ejercicios fiscalizados.

El incumplimiento de los plazos de rendición de las cuentas anuales podría suponer infracción del artículo 141.1.e) de la Ley General Presupuestaria.

Las Cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto fueron rendidas por el Concejal depositario, informadas por la Intervención y aprobadas por decretos de la Alcaldía, de fechas 2 de febrero de 1989 y 2 de Julio de 1990, respectivamente, con incumplimiento del artículo 22.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que determina como competente para tal formalidad al Pleno de la Corporación. Las diferentes rúbricas carecen de resúmenes y presentan numerosas subcuentas, en especial la rúbrica "Operaciones Diversas", a través de la cual se canaliza un volumen de ingresos y gastos de naturaleza presupuestaria que debería integrarse en la liquidación del presupuesto correspondiente.

En las rúbricas que efectivamente tienen naturaleza extrapresupuestaria (retenciones tributarias, de seguridad social, etc.) no se ha establecido la correspondencia y cuadre adecuados entre sus cargos y abonos, por falta de desarrollo suficiente y detallado.

Se ha observado la existencia de operaciones registradas en las cuentas de VIAP que, por su naturaleza, deben aplicarse a los presupuestos de la Corporación. Estas operaciones alcanzaron la cifra de 3,89 millones de pesetas en el año 1988 y de 7,18 millones de pesetas en el año 1989 (de esta última cifra, 5,3 millones de pesetas corresponden a gastos financieros).

Las Cuentas de Tesorería se rinden trimestralmente y están aprobadas por un decreto de la Alcaldía. Presentan defectos en su formación, debido a la falta de correspondencia con las cuentas de presupuestos y de conciliación con arqueos y saldos bancarios.

La documentación rendida por el recaudador no puede considerarse como una cuenta de Recaudación, por cuanto incumple las reglas 186 a 190 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad (Decreto 2260/1969, de 24 de Julio), ya que se produce una confusión entre los cargos en período voluntario y en ejecutivo.

En el año 1988 se registró en la cuenta de Recaudación una baja de valores y recibos al cobro por importe de 134,83 millones de pesetas y en el año 1989, de 2.042,8 millones de pesetas. Los componentes más importantes de estas bajas eran valores correspondientes al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, que representaban el 97,6 por ciento y el 99,7 por ciento, respectivamente, del total de las cantidades dadas de baja.

Dada la importancia de las cifras anteriores, se recomienda a la Corporación que preste gran atención a la recaudación de sus derechos y a los expedientes de baja de valores, debido, entre otras razones, a su incidencia en la cuantía del remanente de tesorería de la Entidad.

Al no haber sido rendidas las cuentas correspondientes al período fiscalizado, las consideraciones y comentarios que se hacen en los apartados siguientes tienen un carácter muy limitado y de provisionalidad. Se limitan a una exposición de los resultados deducidos del análisis de determinados documentos y justificantes contables, sin que los mismos estén encuadrados en el marco general de la rendición de las cuentas anuales, y por ello podrían ser matizados o incluso modificados de producirse una posterior rendición de cuentas.

5. INGRESOS

La financiación por impuestos directos se ha debido fundamentalmente, en el ejercicio de 1988, al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, que representa un 92,21 por ciento. La ponderación de este impuesto en 1989 es del 62 por ciento. Su participación relativa en el total del capítulo 1 disminuye en 1989, debido al fuerte incremento que se produce en la Contribución Urbana, que pasa de un importe total liquidado de 26,79 millones de pesetas en 1988 a 545,45 millones de pesetas en el ejercicio 1989.

Los recursos por tasas y otros ingresos proceden en el ejercicio 1988, en un 82,18 por ciento, de las licencias urbanísticas, porcentaje que se mantiene en 1989. Destaca

igualmente la previsión de ingresos por Contribuciones Especiales, que ascendió en 1988 a 178 millones de pesetas y, en 1989 a 220,63 millones de pesetas y en las que no se produjo ninguna liquidación en ambos ejercicios.

La financiación ajena está integrada, en 1988, por una operación de tesorería por importe de 250 millones de pesetas, reembolsada en el mismo ejercicio, y por préstamos con vencimiento a largo plazo para financiación de inversiones, que ascendieron a 468,68 millones de pesetas. En el ejercicio 1989 se realizó una operación de tesorería por importe de 85 millones de pesetas, instrumentada en letras de cambio, que fué reembolsada en el mismo ejercicio, y se concertó un préstamo a corto plazo, con vencimiento en diciembre de 1989, que no se amortizó a su vencimiento, y cuyo importe ascendía a 316 millones de pesetas. Además, se concertaron otros préstamos a largo plazo por importe de 300 millones de pesetas.

Un importante porcentaje de las transferencias y subvenciones recibidas, del orden del 40 por ciento, se ha registrado, indebidamente, en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.

El grado de recaudación de los derechos liquidados ha sido, en ciertas rúbricas presupuestarias, sensiblemente reducido. En el ejercicio de 1988 se recaudó el 14 por ciento de las resultas de ejercicios anteriores y el 52 por ciento de las variaciones de activos financieros. En el ejercicio de 1989 se recaudó el 5 por ciento de las transferencias de capital, el 29 por ciento de las variaciones de activos financieros y el 40 por ciento de las resultas de ejercicios anteriores.

La Corporación deberá prestar mayor atención al ejercicio de la función recaudatoria, pues frente a las crecientes necesidades financieras de la misma, figura el descenso del porcentaje medio de recaudación, que en 1988 fue del 81 por ciento de los derechos liquidados y en el año 1989 del 61 por ciento.

Al no haber aportado la Corporación los expedientes correspondientes, no se ha podido comprobar la aplicación a su finalidad de las transferencias de capital recibidas, cuyo importe es de 16,65 millones de pesetas.

En el examen de los mandamientos de ingresos se han detectado imputaciones incorrectas en los conceptos y en los ejercicios de aplicación, por no seguirse en todos los casos el rigor cronológico debido. En el año de 1988, se contabilizaron en el presupuesto del ejercicio, entre otros, el Impuesto de Circulación de Vehículos de 1986, la tasa de Recogida de basuras de 1989 y las tasas de Puestos de Mercadillo de 1983. En el año 1989 se aplicaron al ejercicio corriente ingresos de ejercicios anteriores, entre otros, los de Circulación de Vehículos de 1986 y Recogida de basuras de 1987 y 1988. Al capítulo 7 de transferencias de capital se aplicaron las aportaciones de la Consejería de Hacienda derivadas de los Convenios de Reforma y Ampliación de Centros Escolares con la Comunidad Autónoma de Canarias, de los años 1986, 1987 y 1988.

En el mes de septiembre de 1989 la Corporación procedió a liquidar a ERCROS, S.A., la cantidad de 2.062,65 millones de pesetas por el Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, con motivo de la fusión de las empresas Unión de Explosivos RioTinto, S.A., y Cros, S.A.

En el mes de febrero de 1990, con posterioridad al período fiscalizado, la Corporación anuló la liquidación anterior y realizó otra nueva al finalizar el año 1990, por importe de 1.468,74 millones de pesetas. El motivo de esta actuación fue la estimación por la Entidad Local del recurso de reposición planteado por la empresa contribuyente, al considerar que en la primera liquidación no se había considerado el valor de las mejoras permanentes realizadas en los terrenos objeto de imposición. En relación con la segunda liquidación, es de señalar que el equipo de fiscalización no ha dispuesto de los antecedentes, estudios, valoraciones, etc. que han documentado y justificado los términos de la misma y que hubieran permitido evaluar la razonabilidad de la determinación de los importes de las mejoras imputadas y, subsiguientemente, de las nuevas bases imponibles.

El día 10 de noviembre de 1990, el Pleno de la Corporación acordó aprobar un proyecto de convenio de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria citada, que suscribiría con ERCROS, S.A.. Dada la lógica falta de concreción del mencionado documento, se considera que, en el supuesto de que se formalizase dicho convenio con carácter definitivo, deberá adecuarse su contenido a lo establecido en el Reglamento de Recaudación y en las normas concordantes para la concesión de fraccionamientos y aplazamientos en el pago de las deudas tributarias.

Por otra parte, se ha observado en el proyecto de convenio mencionado una cláusula condicional que prevé que, en el supuesto de que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote reduzca el coeficiente, vigente en 1990, de aprovechamiento urbanístico de los terrenos objeto de liquidación tributaria, automáticamente la Corporación bonificará las cuotas liquidadas a ERCROS, S.A. por este concepto de Incremento del Valor de los Terrenos. Se considera que dicha cláusula se opone a lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los remanentes de Tesorería de la Entidad al finalizar los ejercicios de 1988 y 1989 eran positivos, de 146,41 millones de pesetas y 235,62 millones respectivamente, si bien no se había aplicado a estas cifras ninguna provisión por derechos de cobro. Aunque estos fondos han aumentado en un 60,9 por ciento, la relación de valor con las obligaciones reconocidas y liquidadas de cada ejercicio ha descendido desde el 7,1 por ciento en 1988 al 5,9 por ciento en el año 1989.

6. GASTOS

Se ha comprobado que los mandamientos de pago revisados (195 documentos con un importe de 442,5 millones de pesetas) indican, como momento de reconocimiento de las obligaciones, el del pago de las mismas. Por otra parte, algunos de los pagos se han producido con anterioridad, incluso, a la fecha de formalización del mandamiento correspondiente.

Los mandamientos de pago examinados adolecen, en un porcentaje próximo al 30, de defectos de aplicación presupuestaria y de imputación temporal. Una parte de los Mandamientos de pago registrados en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto corresponde a conceptos de naturaleza presupuestaria, como ya se ha indicado. Diversas obras y mejoras realizadas en el término municipal se han contabilizado como gastos corrientes. Las cantidades reflejadas como resultas carecen de documentación justificativa y, por lo que se deduce de los registros contables, no constan con suficiente detalle los importes de las deudas pendientes con proveedores y otros acreedores, al no llevarse registros y relaciones que reflejen esta situación financiera.

Durante el período fiscalizado se han tramitado dos expedientes de reconocimiento de créditos, sin consignación presupuestaria previa, por importe de 230 millones de pesetas y 156,19 millones de pesetas, respectivamente, con financiación prevista por el remanente de Tesorería.

Se han realizado numerosas contrataciones laborales al margen del sistema de oferta pública de empleo, y muchas de ellas no estaban debidamente regularizadas, en especial los servicios de custodia, de monitores y de limpieza en diversas dependencias de titularidad municipal. Con los registros disponibles en la Corporación no se ha podido determinar la plantilla laboral de 1988 y 1989, aunque, según se deduce de los recibos salariales, vales y otras formas de remuneración de servicios personales, superaron, en algunas fechas, los 400 empleados efectivos, los cuales fueron destinados a diversas obras y servicios municipales, sin la existencia de una regulación previa.

Al terminar el ejercicio de 1989, la deuda contraída con la Mutualidad de Previsión de Administración Local (MUNPAL) era de 29,12 millones de pesetas y se había abierto un expediente en el Ministerio de Economía y Hacienda para compensar las deudas del Ayuntamiento con la citada Mutualidad con parte de las transferencias corrientes a percibir, en el futuro, del citado Ministerio.

También se ha advertido que la Corporación ha sido penalizada con recargos por demora en el pago a la MUNPAL, en las siguientes ocasiones:

Noviembre 1987	51.702 pesetas
Diciembre 1987	103.339 pesetas
Febrero 1988	62.689 pesetas
Marzo 1988	62.750 pesetas
TOTAL	280.480 pesetas

En las actividades a fomentar mediante transferencias y subvenciones a terceros, con concreción de fines y con sistemas de seguimiento a través de la oportuna justificación, se pone de manifiesto una falta de definición de objetivos. El destino principal de las subvenciones concedidas fueron los fines deportivos y el fomento de actividades agrícolas e industriales.

7. PATRIMONIO

a) De los activos.

Se ha verificado que no existe inventario. En su lugar, el Ayuntamiento facilitó un estado de existencias iniciales a 1 de enero de 1988 y de 1989, sin detalle o desglose individualizado. Contrastando los datos de este documento provisional con los registros contables en 1988, en el epígrafe de "Vehículos" se producen determinadas diferencias, ya que frente a unos gastos presupuestarios de 17.577.341 pesetas, en las relaciones se contabilizan únicamente en patrimonio 10.308.233 pesetas, sin que haya sido explicada la razón de esta diferencia de valoración.

Como ya se ha señalado anteriormente, la Corporación incumple la tramitación del expediente de aprobación de las cuentas de Administración del Patrimonio. Tampoco consta la existencia de certificación registral de los bienes inmuebles propiedad de la Corporación.

En 1988, el componente principal del activo de la Entidad lo constituyen los bienes inmuebles, con significativa importancia de los terrenos y los solares. Del examen de estos datos parece deducirse una política de adquisición de terrenos en núcleos de su área de influencia y en términos municipales próximos, política que se acentúa en el ejercicio siguiente. Los aumentos en este epígrafe obedecen fundamentalmente a la adquisición de terrenos y edificaciones, mientras que las obras realizadas importan 38 millones de pesetas, de los 92,88 millones contabilizados.

El Ayuntamiento ha registrado, como único bien productivo de su patrimonio, el Palacio Spínola, cuyo destino es de palacio museo abierto al público. Sin embargo, en el libro de rentas-exacciones se ha comprobado la liquidación de derechos y obtención de rentas por los siguientes conceptos:

(cifras en pesetas)

	1988	1989
- Venta de arena y china	21.949.710	14.300.620
- Alquiler Farmacia	240.000	220.000
- Alquiler Parcelas	770.000	638.000

Entre los bienes municipales, tienen el carácter de histórico-artístico los siguientes:

1. El Castillo de Santa Bárbara, destinado a Museo del Emigrante.
2. El Palacio Spínola, destinado a museo y residencia oficial de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en Lanzarote.

No se ha establecido ninguna directriz, ni se dispone de ningún tipo de medida de cobertura de riesgo, para garantizar la conservación y la protección de los bienes de titularidad municipal.

b) De los pasivos.

Para atender las necesidades financieras municipales, durante el período fiscalizado, se han concertado los préstamos siguientes:

Entidad	Importe	Plazo de vencimiento
Banco de Crédito Local	140.000.000	Largo plazo
Banco Hispano Americano	328.686.877	Largo plazo
Banco Hispano Americano	250.000.000	Corto plazo
TOTAL EJERCICIO 1988 ...	718.686.877	
Banco de Crédito Local	280.000.000	Largo plazo
Banco de Crédito Local	20.000.000	Largo plazo
Banco Hispano Americano	316.000.000	Corto plazo
SUBTOTAL	616.000.000	
Letras de Cambio	85.000.000	Corto plazo
TOTAL EJERCICIO 1989	701.000.000	

Todo el endeudamiento a largo plazo ha sido autorizado por la Delegación de Hacienda y se ha concertado con un año de carencia. La operación de crédito a corto plazo de 1989, por importe de 316 millones de pesetas, se acordó el mismo día de la aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio (3 de febrero de 1989), el cual sólo autoriza la toma de créditos a corto plazo por importe 5 millones de pesetas. Este crédito, que vencía el 31 de diciembre de 1989, estaba, sin embargo, pendiente de amortizar en la fecha de la terminación de la presente fiscalización.

La evolución del pasivo (créditos a largo plazo en el período fiscalizado), ha sido la siguiente:

Ejerc	Situación a 1 enero	Aumentos	Total	Amortizaciones	Situación a 31 diciembre
1988	181.412.116	468.686.877	650.098.993	15.440.726	634.658.267
1989	634.658.267	300.000.000	934.658.267	22.539.590	912.118.677

Por su parte, el capítulo 3 "Intereses", presenta el siguiente detalle:

Año	Obligaciones Reconocidas
1988	64 689.006 Pesetas
1989	173 564.006 Pesetas
TOTAL	238.253.012 Pesetas

Las obligaciones liquidadas por intereses y cuotas de amortización de operaciones pasivas alcanzaron en 1989 el 7,1 por ciento de los ingresos corrientes del ejercicio.

8. SERVICIOS MUNICIPALES Y URBANISMO

El ejercicio de la función de control externo no se agota en la revisión de la actividad económico-financiera, tanto en ingresos como en gastos, de la Corporación, sino que se extiende también a la investigación de los costes y rendimientos de los diferentes servicios municipales y a la aplicación en los mismos de los principios de legalidad, eficiencia y economía.

Dado el reducido desarrollo de los sistemas contables de la Entidad y la inexistencia de un procedimiento de contabilidad auxiliar de costes, así como la falta de determinación y

cuantificación de los objetivos a cubrir por los diferentes servicios municipales, no se dispone de fundamento suficiente para poder emitir opinión sobre la razonabilidad de los resultados obtenidos por los citados servicios.

En cuanto a la actividad urbanística, es de señalar la carencia de registros contables auxiliares en los que se anoten los compromisos financieros municipales, adquiridos con motivo de la aprobación de los planes de ordenación territorial, así como el grado de cumplimiento detallado de los mismos.

La información disponible únicamente permite una descripción general de la entidad de los servicios municipales, que se expone a continuación, acompañada, en algunos casos, de determinados datos financieros no sistematizados, con objeto de dar una visión parcial, al menos, de cual es la equivalencia, en prestación de servicios, que la Corporación ofrece como contrapartida al volumen de los gastos que realizó durante cada uno de los ejercicios.

Como no se ha facilitado por la Corporación la relación de inversiones realizadas en cada núcleo de población durante el período fiscalizado, solamente se pueden presentar los gastos realizados con carácter general. En el anexo número 2 se relaciona la parte de estas inversiones sobre las que se ha obtenido alguna información y que corresponde al 75 por ciento de las obligaciones liquidadas en el período fiscalizado, en el capítulo de inversiones reales.

La Corporación presta los servicios mínimos previstos en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, a excepción del alcantarillado, que sólo existe en la urbanización privada de Costa Teguise. El acceso a los núcleos de población no se cumple en La Graciosa y en Las Laderas. Igualmente, Las Laderas y Las Cabreras no disfrutan del servicio de control de alimentos. Los servicios mínimos, referidos a los diferentes núcleos de población, se relacionan en el anexo 3 de este Informe.

El Ayuntamiento presta voluntariamente los servicios siguientes, no preceptivos legalmente:

- Instalaciones Deportivas de Uso Público
- Servicios Sociales
- Actividades Culturales y colaboración en Fiestas Locales
- Actividades Sanitarias Complementarias
- Formación Turística (la Corporación ha creado y es titular de la Escuela de Hostelería y Turismo de Lanzarote).
- Regulación del mercado agrícola, ganadero y pesquero de la isla (por medio de subvenciones a productos primarios y de acciones empresariales de producción y distribución)
- Mantenimiento y ornato de vías interurbanas

8.1. ***Servicio de Suministro de Agua***:

La empresa I.N.A.L.S.A. y un Consorcio constituído por los siete municipios de la isla y por el Cabildo Insular se encargan de la captación de agua a través de un sistema de desalinización y del suministro domiciliario a los distintos núcleos de población del municipio de Teguise. Dicha empresa depende funcionalmente del Cabildo Insular, aunque la Corporación de Teguise cofinancia las inversiones de infraestructura, principalmente, las de ampliación de la red de suministro.

8.2. ***Servicio de Recogida de Residuos***:

El servicio de recogida domiciliaria de basuras, transporte y traslado de las mismas al vertedero insular, gestionado por el Cabildo Insular de Lanzarote, está contratado con una empresa privada desde 1981. El servicio se efectúa tres veces por semana desde 1989; anteriormente se efectuaba dos veces por semana y no alcanzaba a la totalidad de los núcleos urbanos que componen el municipio. En 1988, el coste del servicio era de 8.400.576 pesetas, y se adjudicó la gestión del mismo, en febrero de 1989, por un importe 17.789.517 pesetas sin un proceso contractual regular.

8.3. ***Servicio de Obras y Urbanismo***:

No se ha llegado a tener constancia de ningún tipo de planificación, ni de la existencia de unos objetivos marcados por la Corporación para la gestión y desarrollo de este Servicio. A pesar de su trascendencia económica para la Entidad, tampoco funciona de forma permanente un servicio gestor de las obras municipales, del planeamiento urbanístico y de los temas de arquitectura. Las actuaciones que se llevan a cabo por este Servicio son decididas según van surgiendo las necesidades, de modo completamente coyuntural, sin planificación ni programación alguna. La prestación de este servicio ha generado ingresos para la Corporación procedentes de las licencias de obras (importantes en el período fiscalizado), así como por otras actividades afines prestadas por la Oficina Técnica.

8.4. ***Servicio de Deportes***:

Las actuaciones municipales en materia deportiva se han centrado en las actividades que, con mayor detalle, se relacionan en el anexo número 4.

Es de señalar el esfuerzo inversor de la Corporación en instalaciones deportivas durante el período fiscalizado, pues se estima que supera los 300 millones de pesetas.

8.5. ***Servicios Socio-Culturales***:

Bajo la denominación de "Servicios Socio-Culturales" se engloban las diferentes actuaciones que en asistencia social, promoción cultural y ayuda sanitaria, viene prestando la Corporación. Durante el período fiscalizado se han concretado, en la atención a los grupos sociales siguientes: a) Familia, infancia y adolescencia; b) Juventud; c) Mujer; d) Tercera Edad; e) Minusválidos; f) Toxicómanos y los requeridos por la demanda social.

El municipio cuenta con 14 centros socio-culturales. Por otro lado, existe un local (antiguo convento) donde se desarrollan espectáculos. Las inversiones en el período fiscalizado se estiman en 300 millones de pesetas. La totalidad de los cursos de educación alternativa que se imparten en los centros socio-culturales están dirigidos a toda la población del municipio y son gratuitos.

8.6. ***Ordenación del Territorio y Urbanismo***

La actividad urbanística de la Corporación Municipal ha tenido consecuencias económico-financieras importantes, con independencia de cualquier consideración sobre la incidencia socio-económica de los planes urbanísticos en la vida presente y futura del municipio. El ejercicio de la función de ordenación territorial genera compromisos de gastos en infraestructuras y previsiones de ingresos y modificaciones patrimoniales de diversa naturaleza (cesiones obligatorias, revalorizaciones de suelo propio, incremento del valor catastral del terreno, tasas por licencias de construcción, principalmente).

En el término municipal de Teguise, que tiene una extensión de 26.398 hectáreas, no existe Plan General Municipal de Ordenación Urbana.

La Oficina Técnica no dispone del plano actualizado del término municipal, donde se identifiquen los tipos de suelo (urbano, urbanizable programado, urbanizable no programado y no urbanizable) y si está o no edificado, con los detalles del volumen de edificación; consecuentemente, no es posible realizar una valoración adecuada de la ordenación territorial del Municipio.

Los órganos responsables de la gestión urbanística de la Corporación son el Pleno, el Alcalde, la Comisión de Gobierno (con facultad de concesión de licencias, por delegación del Pleno de 7 de julio de 1987), así como el Concejal de Obras, que tiene atribuciones para dirigir y organizar la actividad urbanística a nivel interno, pero no facultades decisorias sobre resoluciones que puedan afectar a terceros.

Las tareas complementarias del urbanismo se desarrollan en el Oficina Técnica, la cual depende del Concejal Delegado de Obras Públicas. La inspección urbanística corresponde a la Policía Municipal.

Como ya se ha indicado, el municipio carece de Plan General de Ordenación Urbana, siendo el Plan Insular de Lanzarote de 1973 el que marca las directrices básicas a las que se han de adaptar las Normas Urbanísticas Municipales. Durante el período fiscalizado, se tramitaron las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico para el municipio, las cuales fueron aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación el 6 de agosto de 1988. Esta tramitación quedó paralizada, con objeto de adaptarse a la modificación que se había iniciado, a su vez, en el Plan Insular de Lanzarote.

Durante el bienio 1988-1989 se ha mantenido una intensa actividad de planeamiento urbanístico por parte de la Corporación. Se han aprobado cuatro planes parciales y varias delimitaciones de suelo urbano en núcleos municipales de población.

Durante el período fiscalizado se produjo un fuerte incremento de la construcción en el término municipal, que no corresponde a un aumento, en la misma proporción, de la población residente, sino básicamente a la promoción de segundas viviendas inducida por el desarrollo turístico de la Isla. Los ingresos obtenidos en los ejercicios 1988 y 1989 por licencias urbanísticas (de obras, de ocupación, proyectos de urbanización) alcanzan cifras significativas:

(cifras en pesetas)

Ejercicio	Previsión Definitiva	Derechos reconocidos
1988	270.000.000	358.998.848
1989	830.000.000	874.551.095

El importante incremento registrado en el ejercicio 1989, se debe, en parte, a la modificación acordada el 10 de octubre de 1988, de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, que eleva la tarifa del 4 por ciento, en 1988, al 6 por ciento, en 1989, del valor de la obra autorizada y, también en parte, al incremento de las actuaciones constructoras.

Se han analizado, previa selección, doce expedientes de licencias de obra (detallados en el anexo número 5), que representan el 6 por ciento de los valores liquidados durante el bienio. De tal análisis resultan las siguientes consideraciones:

a) En los expedientes estudiados no consta el proyecto de la obra, por lo que no se ha podido verificar si están debidamente visados por los Colegios Oficiales, ni conocer su presupuesto total.

b) En todos ellos se ha aprobado la liquidación de la tasa preceptiva de forma simultánea a la concesión de la licencia, y no queda constancia en los expedientes de que se haya realizado el pago de las obras.

c) No se ha podido determinar si el plazo de vigencia de la licencia, que es de un año hasta el comienzo de las obras, se ha cumplido, al no constar en la documentación examinada la fecha de inicio de las mismas obras.

d) En tres de los expedientes examinados, la licencia de obra ha sido concedida por la Comisión de Gobierno; las restantes han sido concedidas irregularmente por un Decreto de la Alcaldía.

e) En tres de los expedientes examinados se han concedido licencias de obra, con informe desfavorable de los Servicios Técnicos.

f) En seis expedientes examinados, la tramitación de la licencia ha durado más de 2 meses, superando el plazo señalado por el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

g) No existe constancia documental de la comunicación de las licencias concedidas a la Intervención, para el registro contable del derecho a favor de la Hacienda Municipal. La Intervención sólo contabiliza las licencias cobradas, no constando en contabilidad, por tanto, las licencias cuyos derechos están pendientes de cobro.

h) El 5 de julio de 1989, la Comisión de Gobierno acordó autorizar el aplazamiento de las liquidaciones por licencias municipales de obra y de primera ocupación de las parcelas números 243 y 244 del Plan Parcial Costa de Teguise y el pago fraccionado de las mismas, aceptando como garantía tres efectos mercantiles, de vencimiento en octubre de 1989, y cuatro, con vencimiento en abril de 1990, avalados por Crédito y Caución, S.A., los cuales fueron descontados posteriormente con unos gastos para el municipio de 13.583.495 pesetas. No consta que se hayan liquidado intereses por el fraccionamiento y el aplazamiento del pago de las liquidaciones citadas, para compensar los gastos de descuento de los efectos mercantiles citados.

9. ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Las comprobaciones efectuadas indican la inexistencia de un proceso uniforme de contratación administrativa, tanto en relación con las personas y órganos intervinientes como en los trámites. Igualmente, el análisis de los Mandamientos de pago, de las relaciones patrimoniales, de los Libros de Caja y de los Libros de Intervención, señalan la ausencia de expedientes de contratación en determinadas adquisiciones de bienes y servicios. Algunos casos observados son los siguientes:

- La adjudicación de la decoración del Palacio Spínola, por importe de 2.300.000 pesetas.
- La adquisición de un piano para el Convento San Francisco, por importe de 800.000 pesetas.
- La adquisición de maquinaria agrícola, por importe de 5.056.000 pesetas.
- La adquisición de diversos ordenadores para las oficinas municipales, por importe de 7 millones de pesetas.
- La adquisición de un vehículo automóvil, de segunda mano, para la atención de asuntos oficiales, por importe de 3.400.000 pesetas.
- Numerosas obras y mejoras gestionadas directamente por la Corporación (muros de contención, cerramientos de edificios públicos, canalización de terrenos, etc.) que han superado, en una estimación global, los 300 millones de pesetas.

En los casos en los que ha habido tramitación contractual, se ha comprobado la falta de formación de expedientes de contratación completos y sistemáticamente ordenados, así como su dispersión por las distintas dependencias municipales y que no consta la formulación de ningún tipo de reparo por Secretaría o Intervención a los contratos llevados a cabo por la Corporación.

Para un análisis mas detallado de la actividad contractual municipal se han seleccionado 18 contratos: 13 de obras, 1 de suministros, 1 de servicios y 3 de adquisición de inmuebles, con el detalle que figura en el anexo 6. Estos contratos representan aproximadamente el 10 por ciento del valor de los registrados como formalizados por la Corporación en el período fiscalizado.

La revisión de los diferentes expedientes ha puesto en evidencia los siguientes hechos:

a) En general, los proyectos de contratación están incompletos, no constando en una parte de ellos el pliego de prescripciones técnicas, ni los planos de conjunto y de detalle, ni el presupuesto, ni la memoria.

b) Excepto en los contratos de asfaltado de caminos, faltan los preceptivos informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención sobre la existencia de consignación presupuestaria.

c) Sólo en los expedientes de las Naves del Complejo Agroindustrial consta la realización del replanteo previo.

d) Respecto a la selección del contratista, en cuatro de los expedientes seleccionados no hay constancia de la forma de contratación, diez se adjudicaron de forma directa, dos se adjudicaron por concurso y dos por subasta.

Las anomalías más importantes detectadas en este apartado de la contratación son:

. No se dispone de la totalidad de las plicas presentadas;
. Falta de publicidad de la licitación;
. No existe constancia de la tramitación de las proposiciones de los licitadores.
. No consta debidamente la adjudicación provisional ni la definitiva.

e) En los expedientes no consta la formalización del contrato exigida por el artículo 120 del Reglamento de Contratos del Estado y 48 del Reglamento de Contratos de las Corporaciones Locales.

f) No constan las garantías provisionales exigibles a los licitadores, ni las garantías definitivas exigibles a los adjudicatarios.

g) El Ayuntamiento no lleva, en contra de lo establecido, una contabilidad auxiliar para el control de las obras.

h) Las certificaciones de obra no se emiten con regularidad o, al menos, no constan unidas a los expedientes de contratación. Cuando se unen, no coinciden con el presupuesto de ejecución.

i) En los expedientes de contratación examinados (excepto en el de Asfaltado de caminos en Tahiche) no figuran las recepciones provisional ni definitiva.

j) Se destaca la ausencia de plazos o la adopción de medidas para la definición y cumplimiento de los mismos, en la ejecución de las obras.

k) Del examen del Libro de VIAP resulta que, durante el año 1989, no se ingresó ninguna fianza por contratación.

l) En el contrato de las instalaciones Deportivas Municipales Los Molinos, en Teguise, la obra se ha realizado sin proyecto, al ser declarado inviable el presentado; pese a ello, se continuó con la obra, prescindiéndose, casi por completo, de la tramitación del expediente de contratación correspondiente.

m) Los contratos de Asfaltado de Caminos en Tahiche y de Fabrica de Quesos en Teguise se realizaron sin la suficiente consignación presupuestaria.

n) Tratándose de proyectos redactados por facultativos ajenos a la Corporación, no se formaliza un expediente de contratación de sus servicios o de su asistencia técnica.

o) En la contratación para adquisición de inmuebles, no existe ningún expediente de contratación en sentido jurídico-administrativo, únicamente la formalización del contrato con el vendedor y el acuerdo Plenario de adquisición.

10. ENTES CON PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO

No consta la existencia, durante el período fiscalizado, de ningún Organismo autónomo ni empresa mercantil dependientes de la Corporación.

En los ejercicios económicos de 1988 y 1989, la Corporación realizó una serie de inversiones como actuaciones preparatorias para la constitución, el 3 de agosto de 1990, fuera ya del período fiscalizado, de la Empresa Municipal Agrícola y Marinera de Teguise, S.A. Esta sociedad tiene por objeto la prestación de los servicios de conservación y manipulación de productos agrícolas y marineros, así como la realización de toda clase de cultivos, tanto en el campo como en el mar. Su capital social es de 20 millones de pesetas, totalmente desembolsado por el Ayuntamiento de Teguise.

La actividad inversora se concretó en la instalación de bodegas de vino y fábricas de carmín, pienso y queso, a la vez que se construyeron cámaras de frío para el almacenamiento de productos y plantas de envasado.

ANEXOS

ANEXO NUMERO - 1

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1988

(Cifras en pesetas)

INGRESOS	PREVISION INICIAL	MODIFICAC.	PREVISION DEFINITIVA	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUD. LIQUIDA
Capítulo 0	180.214.220		180.214.220	181.994.445	25.010.379
Capítulo 1	294.231.505	113.291.781	407.523.286	555.965.473	474.200.056
Capítulo 2	13.000.000		13.000.000	13.135.067	10.364.001
Capítulo 3	481.316.618	26.000.000	507.316.618	436.838.499	436.164.499
Capítulo 4	113.000.000	12.000.000	125.000.000	139.162.474	122.996.974
Capítulo 5	3.765.000		3.765.000	1.208.233	1.208.233
Capítulo 6	170.000.000		170.000.000	170.000.000	100.000.000
Capítulo 7	50.000.000		50.000.000		
Capítulo 8	1.000.000	1.204.973	2.204.973	2.204.973	1.117.429
Capítulo 9	473.686.877	245.000.000	718.686.877	718.686.877	622.734.670
TOTAL	1.780.214.220	397.496.754	2.177.710.974	2.219.196.041	1.793.796.241

GASTOS	PREVISION INICIAL	MODIFICAC.	PREVISION DEFINITIVA	OBLIGACIONES LIQUIDADAS	PAGOS LIQUIDOS
Capítulo 0	139.863.872		139.863.872	139.863.872	104.550.508
Capítulo 1	241.041.498	47.255.000	288.296.498	283.033.374	272.408.786
Capítulo 2	498.380.000	97.804.000	596.184.000	592.950.042	553.738.720
Capítulo 3	24.689.006	40.000.000	64.689.006	64.689.006	64.453.931
Capítulo 4	82.878.153	8.000.000	90.878.153	90.796.429	62.516.525
Capítulo 6	696.720.117	-3.781.479	692.938.638	556.917.704	405.237.357
Capítulo 7	12.850.500		12.850.500	12.850.500	789.647
Capítulo 8	1.000.000	1.204.973	2.204.973	2.204.973	2.204.973
Capítulo 9	42.440.726	247.221.459	289.662.185	289.183.199	287.720.385
TOTAL	1.739.863.872	437.703.953	2.177.567.825	2.032.489.099	1.753.620.832

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1989

(Cifras en pesetas)

INGRESOS	PREVISION INICIAL	MODIFICAC.	PREVISION DEFINITIVA	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUD. LIQUIDA
Capítulo 0	425.399.800		425.399.800	460.168.584	185.336.365
Capítulo 1	762.279.271	100.000.000	862.279.271	1.506.826.367	439.757.884
Capítulo 2	16.000.000		16.000.000	15.258.045	11.048.807
Capítulo 3	737.355.729	473.000.000	1.210.355.729	1.056.137.235	1.054.181.392
Capítulo 4	173.343.781		173.343.781	145.233.332	145.233.332
Capítulo 5	3.765.000		3.765.000	2.306.263	2.306.263
Capítulo 6	250.000.000		250.000.000		
Capítulo 7	248.656.219	60.000.000	308.656.219	308.656.219	16.655.116
Capítulo 8	3.000.000		3.000.000	1.777.148	608.533
Capítulo 9	701.000.000		701.000.000	701.000.000	701.000.000
TOTAL	3.320.799.800	633.000.000	3.953.799.800	4.197.363.193	2.556.127.692

GASTOS	PREVISION INICIAL	MODIFICAC.	PREVISION DEFINITIVA	OBLIGACIONES LIQUIDADAS	PAGOS LIQUIDOS
Capítulo 0	278.868.267		278.868.267	278.868.267	196.756.466
Capítulo 1	458.903.305	212.500.000	671.403.305	658.184.316	599.493.434
Capítulo 2	762.248.345	150.500.000	912.748.345	903.914.824	740.487.585
Capítulo 3	93.564.006	80.000.000	173.564.006	173.564.006	157.690.812
Capítulo 4	119.698.153	-20.000.000	99.698.153	95.397.881	58.592.387
Capítulo 6	1.211.617.301	99.917.738	1.311.535.039	1.311.535.039	683.919.160
Capítulo 7	32.850.500		32.850.500	32.850.500	
Capítulo 8	3.000.000		3.000.000	1.777.148	1.777.148
Capítulo 9	475.310.026	30.000.000	505.310.026	505.310.026	117.076.054
TOTAL	3.436.059.903	552.917.738	3.988.977.641	3.961.402.007	2.555.793.046

ANEXO NUMERO - 2

INVERSIONES REALIZADAS EN RELACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES

EJERCICIO 1.988	
Denominacion	Contraido
const/mejora ctros culturales	73.959.578
acondic.en tahiche bajo y cercado nuevo	43.236.227
electrif.pueblos municipio	32.625.500
honorarios redacc.proyectos	14.000.000
canchas de bola en municipio	32.500.000
canchas de petanca	23.500.000
canchas polideportivas	46.000.000
asfaltados en el municipio	146.129.898
cámara frigorifica en la graciosa	22.916.501
campo futbol Teguise II fase	15.000.000
local Cofradia Ayto. en la Graciosa	7.400.000
Total	457.267.704

EJERCICIO 1.989	
Denominacion	Contraido
const/mejora centros culturales	137.936.582
acondic.oasis Nazaret	105.130.719
campo futbol en municipio	58.000.000
honorarios redacc.proyectos	30.000.000
canchas de bola en municipio	20.000.000
canchas de petanca	3.000.000
canchas polideportivas	53.050.000
asfaltados en el municipio	438.917.738
remodelacion de ermitas	32.000.000
terrenos de lucha en el municipio	25.000.000
construcciones de escuelas	28.000.000
telesferico	11.000.000
Total	942.035.039

ANEXO NUMERO - 3

RELACION DE SERVICIOS MINIMOS MUNICIPALES POR NUCLEOS DE POBLACION

NUCLEOS DE POBLACION	ALUMBRADO PUBLICO	LIMPIEZA PUBLICA	CEMENTERIO	RECOGIDA DE BASURA	ABASTEC. DE AGUA	ALCANTARILLADO	ACCESO NUCLEOS	PAVIMENTACION	VIAS PUBLICAS	CONTROL DE ALIMENTOS
LAS CABRERAS	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
LAS CALETAS	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
CALETA DE CABALLO	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
CALETA DE FAMARA	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
COSTA TEGUISE	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
LA GRACIOSA	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
GUATIZA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
LAS LADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EL MOJON	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
MOZAGA	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
MUÑIQUE	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
NAZARET	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
SOO	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
TAHICHE	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
TAO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
TESEGUITE	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
TIAGUA	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
LOS VALLES	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
VILLA DE TEGUISE	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

1 = Existe el Servicio
0 = Carece del Servicio

ANEXO NUMERO 4

SERVICIO DE DEPORTES
ACTUACIONES REALIZADAS

1) Dotación de canchas múltiples para cada uno de los pueblos del municipio, que son utilizadas por equipos federados y de deporte base.

2) Construcción de cuatro pabellones de petanca para uso de los cuatro equipos federados del municipio, correspondientes a los núcleos de población de Mozaga, Tahiche, Los Valles y Nazaret.

3) Organización de competiciones anuales entre los equipos de los distintos núcleos del municipio.

4) Ayudas y subvenciones a equipos, torneos, competiciones deportivas o para la renovación de equipamiento.

5) Realización periódica de concentraciones de las tres Escuelas Deportivas del Ayuntamiento.

6) Dotación a la mayor parte de los pueblos que componen el municipio de un terreno de lucha canaria.

7) Campañas de recuperación del deporte autóctono de la pelotamano que se practicaba en los pueblos de Soo, Tiagua y La Villa de Teguise hasta los años 70.

8) Construcción de un pabellón cubierto en el núcleo de Tahiche para la práctica de siete modalidades deportivas, con sedes sociales para todos los equipos federados existentes.

9) Construcción de un gran campo de fútbol en Teguise, que incluye: sede social, enfermería, vestuarios dobles, sala de masaje, sala de musculación, gimnasio, sauna, bar cafetería, graderíos, baños públicos, etc.

10) Campos de fútbol en Soo y Guatiza con acondicionamiento básico.

11) Terreno de lucha, campo de fútbol y cancha de usos múltiples en la Isla de la Graciosa.

ANEXO NUMERO 5

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRA SELECCIONADOS

NUMERO DE EXPEDIENTE	OBJETO
198/88	· Apartahotel
100/88	· Hotel
2/3/88	· Hotel
12/88	· Vivienda/locales comerciales
114/88	· Viviendas unifamiliares
120/89	· Apartamentos/centro comercial
71/89	· Apartamentos/centro comercial
105/89	· Hotel
119/89	· Apartamentos/centro comercial
103/89	· Vivienda unifamiliar
129/89	· Almacén y vivienda
157/89	· Vivienda unifamiliar

ANEXO NUMERO 6

RELACION DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

- Instalaciones deportiva municipales "Los Molinos", en Teguise
- Camino desde Teseguite a la carretera general de Tahiche, a Arrieta a la altura de la entrada a Costa Teguise, 1 Fase (Plan de Obras de 1988).
- Asfaltado de caminos en Tahiche
- Intersección en carretera GC -700 p.k. 7.750 a la altura de Nazaret
- Fábrica de Quesos en Teguise
- Adquisición e instalación de maquinaria para Fábrica de Quesos
- Dos naves industriales adosadas de 54 x 20 x 6 en "Complejo Agroindustrial" en Teguise
- Dos naves industriales adosadas de 54 x 20 x 7 en "Complejo Agroindustrial" en Teguise
- Cuatro naves industriales adosadas de 20 x 36 x 7 en "Complejo Agroindustrial" de Teguise
- Adquisición vivienda Villa Teguise en C/Rafael Vega, 6
- Adquisición de vivienda y terreno en Los Valles de D. Facundo Clemente Peraza Bonilla
- Adquisición de terreno (8.832 metros cuadrados) para ampliación de Colegio Público de Tahiche, a Doña. Agustina Valdivia Betancost y a D. Juan Riverol Martín.
- Asfaltado de Caminos en Tiagua
- Asfaltado de caminos en Mozaga
- Asfaltado de caminos en Muñique
- Asfaltado de caminos en Lomo Gordo
- Asfaltado de caminos en Tao
- Contratación del servicio de recogida de basuras

INFORMES SOBRE EL FONDO DE COMPESACION INTERTERRITORIAL (EJERCICIO 1990) DE LAS CC.AA. DE ASTURIAS, CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEON, EXTREMADURA Y MURCIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

EJERCICIO 1990

INDICE

I.- INTRODUCCION

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI
III.1.- CREDITOS GESTIONADOS
A) CREDITOS INICIALES
B) CREDITOS INCORPORADOS

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

V.- CONCLUSIONES

ANEXOS

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, y en el artículo 9 de la Ley 29/1990, del Fondo de Compensación Interterritorial, ha efectuado la fiscalización de los proyectos financiados con cargo al citado Fondo y gestionados por la Comunidad Autónoma de Asturias en el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los trabajos y procedimientos realizados dentro de los planes generales de fiscalización de este Tribunal.

I.- INTRODUCCION

La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial -en adelante FCI- es la norma fundamental que regula este instrumento financiero de las Comunidades Autónomas, ya que en ella se recogen y articulan los principios constitucionales y disposiciones básicas que se contemplan en el artículo 158 de la Constitución Española, y en el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de dichas Comunidades (LOFCA).

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI, ha sido derogada con efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 29/1990, de 27 de diciembre, que recoge el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, de aplicación durante el ejercicio 1990, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1990 establece que los proyectos de inversión del Fondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecución a su entrada en vigor (28 de diciembre de 1990), se regirán por la Ley 7/1984.

Entre los cambios más significativos que aporta la nueva Ley del FCI, destacan los siguientes:

- La determinación de los territorios beneficiarios del FCI, que serán sólo las Comunidades Autónomas de menor desarrollo económico dentro del Estado.
- El destino de los recursos del FCI, disponiéndose que se apliquen a financiar proyectos que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza.
- La armonización de las necesidades de tesorería de la Hacienda Central con las de las Comunidades Autónomas.

Estas reformas, además de adecuar el FCI a los principios constitucionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios sustentados por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 63/1986 y 183/1988, en las que se declara inconstitucional el artículo 10.2 de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor agilidad a las Comunidades Autónomas para la solicitud y percepción de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990 recoge definitivamente el principio de automaticidad de la incorporación de remanentes de créditos, los cuales quedan afectos a la ejecución del respectivo proyecto de inversión, o del que le sustituya, de conformidad con el artículo 16.5 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Artículo 7.5).

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, establece una "Compensación Transitoria" para los ejercicios 1990 y 1991, en tanto no se revise el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, con el caracter de financiación incondicionada.

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verificar la regularidad contable de los créditos del FCI gestionados por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, comprobando su imputación al periodo y conceptos que les corresponden.

2.- Verificar la regularidad legal de las actuaciones realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta a:

- Naturaleza de los gastos realizados.
- Adecuación de las modificaciones realizadas a la normativa aplicable.
- Aplicación de la contabilidad analítica a los proyectos del FCI, de conformidad con su Ley reguladora.
- Adecuación de los gastos realizados a la finalidad señalada por la Ley del Fondo.

3.- Determinación de la ejecución de los proyectos financiados con el FCI.

B) ALCANCE

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las dotaciones del FCI para 1990. La fiscalización se ha realizado de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican a continuación.

C) LIMITACIONES

La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabilidad analítica que establece el artículo 9.3 de la Ley 29/1990, por lo que no es posible determinar objetivamente los costes imputables a cada proyecto, ni las unidades físicas de realización mas significativas.

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI

III.1.- CREDITOS GESTIONADOS

A) Créditos iniciales

Los créditos que figuran asignados a la Comunidad en la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado ascienden a 4.316 millones de pesetas, de los cuales 1.097 millones corresponden a la financiación de los proyectos acordados y 3.219 millones a la Compensación Transitoria.

El crédito inicial del FCI de 1990 para esta Comunidad, excluida la citada Compensación Transitoria, respecto al ejercicio 1989, representa una minoración del 66%.

B) Créditos incorporados

Esta Comunidad no tiene registrado ningún remanente de crédito correspondiente a FCI de ejercicios anteriores, al no haber incorporado los 247 millones de pesetas correspondientes a créditos del ejercicio 1989, que se declararon no disponibles en ese ejercicio por Acuerdo de Consejo del Ministros, de 12 de mayo de 1989.

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

El Anexo I presenta la relación de los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990, en los que no se han introducido modificaciones.

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

El grado de ejecución correspondiente a los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990 es del 96%, cuya distribución se presenta en el anexo II.

Dicho anexo muestra que, con la excepción del proyecto nº 2 (carretera Trubia-Proasa), el resto ha sido ejecutado al 100% al cierre del ejercicio. Todos los proyectos ejecutados están incluidos en el sector de Obras Públicas.

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

En 1990 esta Comunidad ha reconocido derechos por 1.097 millones de pesetas, quedando pendiente de cobro el 50%

Respecto a la Compensación Transitoria de los 3.219 millones de pesetas consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 1990, ha ingresado 2.682 millones, quedando pendiente de cobro 537 millones de pesetas, que corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 1990.

Asimismo, ha ingresado los derechos pendientes de cobro a 1 de enero de 1990 por importe de 307 millones de pesetas.

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

De los siete proyectos que se engloban dentro del FCI/90, por importe de 1.097 millones de pesetas, se han seleccionado como muestra para su análisis la autovía de circunvalación de Gijón, que supone 300 millones de pesetas y el tramo Puente de Villanueva-Soto de la Barca, por un montante de 120 millones de pesetas.

Se han solicitado los documentos de gestión presupuestaria, así como las facturas y certificaciones de obras que los justifican, verificándose la correcta regularidad contable y legal de las operaciones realizadas por la Comunidad, relativa a los proyectos seleccionados.

No obstante, se ha observado que en expropiaciones de terrenos para la ejecución de obras existe un riesgo para la Comunidad que puede afectar a la ejecución de los proyectos, ya que se inician éstas contando sólo con acuerdos verbales con los titulares de los terrenos sin someterse a los trámites administrativos establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa. La agilización de los expedientes de contratación, a que se refiere el artículo 7 de la Ley 5/1983, no autoriza a proceder a la ejecución del contrato ya que con caracter previo a la ocupación de los terrenos, se exige el pago de la indemnización o la consignación de la misma (Artículos 52 y siguientes R.E.F.). [1]

Asimismo, es imposible distinguir, en aquellos proyectos que son cofinanciados, qué parte concreta ha sido financiada mediante fondos provenientes del FCI.

V.- CONCLUSIONES

- La Comunidad no suministra información contable analítica en los términos que dispone el artículo 9.3 de la vigente Ley del Fondo, por lo que se reitera la obligatoriedad de adoptar las medidas oportunas para la aplicación del sistema contable prescrito en la Ley, a los efectos de posibilitar el control de la ejecución de todos los proyectos vinculados al FCI. (Epígrafe II.C).

Madrid, 21 de diciembre de 1993
PRESIDENTE,

Fdo: Adolfo Carretero Pérez

ANEXO I

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Dotación de Proyectos - FCI - 90

(en millones de pesetas)

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
1.-	Autovía Circunvalación Gijón	300	—	300
2.-	Carretera Trubia-Proaza ...	250	—	250
3.-	Pola de Allande-Presa Grandas de Salime	125	—	125
4.-	Sama-El Entrego	170	—	170
5.-	Variante Cabarana	100	—	100
6.-	Puente Villanueva-Soto de la Barca	120	—	120
7.-	Enlace en la Ronda de Langreo	32	—	32
	TOTAL	1097	—	1097

[1] Nueva redacción en virtud de alegaciones.

ANEXO II

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Ejecución y Cumplimiento - Proyectos - FCI - 90

(en millones de pesetas y %)

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
1.-	Autovía Circunvalación Gijón	300	300	100	300
2.-	Carretera Trubia-Proaza ...	250	210	84	210
3.-	Pola de Allende-Presa Grandas de Salime	125	125	100	125
4.-	Sama-El Entrego	170	170	100	170
5.-	Variante Caborana	100	100	100	100
6.-	Puente Villanueva-Soto de la Barca	120	120	100	120
7.-	Enlace en la Ronda de Langreo	32	32	100	32
	TOTAL	1097	1057	96	1057

CASTILLA LA MANCHA

INFORME SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL CASTILLA-LA MANCHA

EJERCICIO 1990

INDICE

I.- INTRODUCCION

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI
III.1.- CREDITOS GESTIONADOS
A) CREDITOS INICIALES
B) CREDITOS INCORPORADOS

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

V.- CONCLUSIONES

ANEXOS

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, y en el artículo 9 de la Ley 29/1990, del Fondo de Compensación Interterritorial, ha efectuado la fiscalización de los proyectos financiados con cargo al citado Fondo y gestionados por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los trabajos y procedimientos realizados dentro de los planes generales de fiscalización de este Tribunal.

I.- INTRODUCCION

La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial -en adelante FCI- es la norma fundamental que regula este instrumento financiero de las Comunidades Autónomas, ya que en ella se recogen y articulan los principios constitucionales y disposiciones básicas que se contemplan en el artículo 158 de la Constitución Española, y en el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de dichas Comunidades (LOFCA).

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI, ha sido derogada con efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 29/1990, de 27 de diciembre, que recoge el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, de aplicación durante el ejercicio 1990, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1990 establece que los proyectos de inversión del Fondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecución a su entrada en vigor (28 de diciembre de 1990), se regirán por la Ley 7/1984.

Entre los cambios más significativos que aporta la nueva Ley del FCI, destacan los siguientes:

- La determinación de los territorios beneficiarios del FCI, que serán sólo las Comunidades Autónomas de menor desarrollo económico dentro del Estado.

- El destino de los recursos del FCI, disponiéndose que se apliquen a financiar proyectos que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza.

- La armonización de las necesidades de tesorería de la Hacienda Central con las de las Comunidades Autónomas.

Estas reformas, además de adecuar el FCI a los principios constitucionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios sustentados por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 63/1986 y 183/1988, en las que se declara inconstitucional el artículo 10.2 de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor agilidad a las Comunidades Autónomas para la solicitud y percepción de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990 recoge definitivamente el principio de automaticidad de la incorporación de remanentes de créditos, los cuales quedan afectos a la ejecución del respectivo proyecto de inversión, o del que le sustituya, de conformidad con el artículo 16.5 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Artículo 7.5).

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, establece una "Compensación Transitoria" para los ejercicios 1990 y 1991, en tanto no se revise el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, con el carácter de financiación incondicionada.

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verificar la regularidad contable de los créditos del FCI gestionados por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, comprobando su imputación al periodo y conceptos que les corresponden.

2.- Verificar la regularidad legal de las actuaciones realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta a:

- Naturaleza de los gastos realizados.
- Adecuación de las modificaciones realizadas a la normativa aplicable.
- Aplicación de la contabilidad analítica a los proyectos del FCI, de conformidad con su Ley reguladora.
- Adecuación de los gastos realizados a la finalidad señalada por la Ley del Fondo.

3.- Determinación de la ejecución de los proyectos financiados con el FCI.

B) ALCANCE

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las dotaciones del FCI para 1990. La fiscalización se ha realizado de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican a continuación.

C) LIMITACIONES

1.- La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabilidad analítica que establece el artículo 9.3 de la Ley 29/1990, por lo que no es posible determinar objetivamente los costes imputables a cada proyecto, ni las unidades físicas de realización mas significativas.

2.- La Comunidad no ha aportado documentación que justifique los motivos por los que ha sustituido, o modificado, los proyectos de inversión relacionados en los Presupuestos Generales del Estado (artículo 6.4 de la Ley 29/1990 del FCI), lo que limita el conocimiento de las causas que motivan las modificaciones introducidas. [1]

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI

III.1.- CREDITOS GESTIONADOS

A) Créditos iniciales

Los créditos que figuran asignados a la Comunidad en la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado ascienden a 15.939 millones de pesetas, de los cuales 11.526 millones corresponden a la financiación de los proyectos acordados y 4.413 millones a la Compensación Transitoria.

El incremento que supone el crédito inicial del FCI de 1990 para esta Comunidad, excluida la citada Compensación Transitoria, respecto al ejercicio 1989, representa un 4%.

B) Créditos incorporados

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Ley del FCI, se han incorporado remanentes de crédito del FCI/89 por importe de 1.060 millones de pesetas, por lo que el crédito disponible en esta Comunidad asciende a 12.586 millones de Ptas. No se han incorporado 132 millones de pesetas correspondientes a FCI de ejercicios anteriores. La distribución de los remanentes no incorporados por los distintos fondos a los que están afectados es la siguiente:

(en millones de pesetas)

FCI/1989	109
FCI/1988	5
FCI/1987	18
TOTAL	132

Asímismo no se han incorporado otros 860 millones de pesetas correspondientes a créditos del ejercicio 1989, que se declararon no disponibles en ese ejercicio por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 1989. [2]

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

El Anexo I presenta la relación de los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990.

Durante el ejercicio 1990 han tenido lugar modificaciones que han afectado a los proyectos de inversión acordados, que se recogen también en el anexo citado, siendo el resumen de las situaciones que presenta el siguiente:

SITUACION	Dotación Inicial Nº	Dotación Inicial (mill. Ptas.)	Dotación Final Nº	Dotación Final (mill. Ptas.)
Proyectos que no varían	24	4.514	24	4.514
Proyectos sustituidos	2	275	-	--
Proyectos nuevos	-	--	7	862
Proyectos modificados	10	6.737	10	6.150
TOTAL	36	11.526	41	11.526

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

A) Grado de Ejecución del FCI

El grado de ejecución global del FCI es del 62%. Su distribución por los distintos Fondos a los que afecta, es el siguiente:

FCI	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION
1990	11.526	7.351	64%
1989	1.060	489	47%
TOTAL	12.586	7.840	63%

Los pagos por estas obligaciones ascienden a 5.740 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 73%. En cuanto a Presupuestos cerrados, la Comunidad ha realizado pagos por importe de 7.405 millones de pesetas, restando 1.669 millones.

B) Grado de ejecución del FCI de 1990

El grado de ejecución correspondiente a los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990 se presenta en el anexo II.

Un análisis del mismo pone de manifiesto las particularidades siguientes:

a) De los 41 proyectos, 6 no presentan ejecución alguna, y son los siguientes:

- Obras de infraestructura en abastecimiento de aguas.
- Vertederos R.S.U.
- Modificaciones, complementarios, carreteras.
- Modificaciones, complementarios, transporte.
- C-3211 Albacete-El Salobral.
- Mataderos.

Los créditos de dichos proyectos, suponen el 3% sobre el total del FCI de 1990.

b) Se han ejecutado al 100%, 7 proyectos que representan el 6% de los créditos.

c) La Consejería de Sanidad y Bienestar Social presenta un grado de ejecución global del 29%, sensiblemente menor al resto de las Consejerías.

d) Los pagos correspondientes a proyectos vinculados al FCI de 1990 ascienden a 5.574 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 76%.

C) Distribución Sectorial de las Inversiones

El Anexo III muestra el importe total a que ascienden las obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio, clasificadas por aquellos sectores de inversión más relevantes entre los citados en el artículo 16.2 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), con especial significación del sector de Agricultura, que concentra el 43% del total de obligaciones reconocidas.

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

La Administración Central ha continuado exigiendo en el presente año a las Comunidades Autónomas todas las formalidades requeridas

[1] En contra de la alegación formulada se entiende que todas las actuaciones administrativas deben estar motivadas (FCI, art. 6.4 de la Ley), sin que su inobservancia pueda considerarse subsanada por la aprobación de la propuesta por la autoridad central.

[2] Véase, sobre la obligatoriedad de su incorporación al ejercicio siguiente, el artículo 12.1 de la Ley 7/1984.

con anterioridad a las sentencias del Tribunal Constitucional. Consecuentemente, en el ejercicio 1990 esta Comunidad ha reconocido derechos por importe de 7.876 millones de pesetas que quedan en su integridad pendiente de cobro al cierre del ejercicio, cuyo detalle por los distintos fondos a los que están vinculados, es el siguiente:

(en millones de pesetas)

DERECHOS RECONOCIDOS	IMPORTE
FCI/1990	7.387
FCI/1989	489
TOTAL	7.876

Respecto a la Compensación Transitoria, de los 4.413 millones de pesetas consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 1990, ha ingresado 3.677 millones, quedando pendientes de cobro 736 millones de pesetas, que corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 1990.

Respecto a Presupuestos Cerrados, de los 13.537 millones de pesetas que figuraban a 1 de enero de 1990, ha cobrado 7.062 millones, dando de baja 2 millones, por lo que quedan aun pendientes de cobro, al cierre del ejercicio 1990, 6.473 millones de pesetas.

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

A) Proyecto nº 8: Infraestructura Agraria

Expediente 342/AB
Aplicación Presupuestaria 21.05.308.602
Consejería de Agricultura

El examen de la documentación que contiene el citado expediente muestra un contrato de carácter administrativo, de fecha 26-12-89, entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.) "Venta de Las Cuevas", que explota la Bodega "Montealegre del Castillo".

En virtud del citado contrato la Junta de Comunidades financia la construcción de la Bodega, de la que es propietaria la Sociedad mencionada, a través de una subvención equivalente al 30% del importe total (85 millones de pesetas), y un anticipo del 70% restante, reintegrable en 10 años, con un interés pactado del 4%.

La Comunidad ha contabilizado con cargo al FCI de 1990, 54 millones de pesetas y 14 millones de pesetas en resultas de 1989, por lo que el total de gasto vinculado a este proyecto al cierre del ejercicio asciende a 68 millones de pesetas, equivalente al 80% del importe total consignado en el contrato.

Analizadas las transacciones realizadas en la ejecución de este proyecto se observan las siguientes particularidades:

a) La contabilización del gasto en la aplicación 21.05.308.602, que corresponde al concepto de inversiones reales financiadas con FCI, es inadecuada, ya que correspondería imputar al Capítulo 7 (Transferencias de Capital) la parte relativa a la subvención, y al Capítulo 8 (Variación de Activos Financieros) el denominado "anticipo", que refleja la instrumentación del préstamo concedido a largo plazo por la Comunidad.

b) El contenido del expediente examinado pone de manifiesto que el destino dado a los recursos del Fondo queda fuera de lo previsto en la Ley que lo regula, por cuanto la citada Ley no recoge la figura del préstamo entre los distintos supuestos que contempla. [3]

B) Proyecto nº 14: Infraestructura Deportiva

Expedientes: - Reparación Polideportivo en Burguillos (Toledo). [4]
- Vestuarios Campo Fútbol de Yuncler (Toledo).
Aplicación presupuestaria 24.03.212.602.
Consejería de Educación.

a) Respecto al contenido de los expedientes examinados, se pone de manifiesto que se financian con FCI reparaciones, no proyectos de inversión, hecho que no contempla la Ley del Fondo.

b) La Comunidad contabiliza los gastos como inversiones reales propias de la misma, cuando dichos proyectos se ejecutan por y para las Corporaciones Locales, a través del correspondiente Convenio con la Comunidad, por lo que deberían haberse contabilizado como Transferencias de Capital.

V.- CONCLUSIONES

- La Comunidad no suministra información contable analítica en los términos que dispone el artículo 9.3 de la vigente Ley del Fondo, por lo que se reitera la obligatoriedad de adoptar las medidas oportunas para la aplicación del sistema contable prescrito en la Ley, a los efectos de posibilitar el control de la ejecución de todos los proyectos vinculados al FCI.

  La documentación correspondiente a las modificaciones introducidas en los proyectos, no suministra información que las justifique, por lo que se recomienda que se elabore y aporte una memoria que permita determinar la motivación de las mismas (Epígrafe II.C).

- No se ha incorporado la totalidad de los remanentes de crédito vinculados a FCI de ejercicios anteriores (Epígrafe III.1.B).

- A 31 de diciembre de 1990 el grado de ejecución del FCI, es del 62%. No obstante, respecto a proyectos vinculados al FCI de 1990, existen proyectos que no han tenido ejecución alguna, o ésta es poco significativa. (Epígrafe III.3).

- La contabilización efectuada por la Comunidad, relativa a algunos gastos de inversión, no resulta coherente en algunos casos con la naturaleza y concepto de las operaciones.

  Se financian con cargo al FCI préstamos a empresas del sector privado, lo que es contrario a la finalidad que la Ley 29/1990 otorga al destino de los recursos del Fondo (Epígrafe IV).

Madrid, 21 de diciembre de 1993
PRESIDENTE,

Fdo: Adolfo Carretero Pérez

[3] La alegación formulada va en contra de la clasificación económica del gasto, por lo que no se altera el texto del informe.

[4] De conformidad con la memoria evacuada por el Arquitecto, de fecha 1 de febrero de 1990, se trata de obras de reparación de dicho Polideportivo, motivadas por inclemencias meteorológicas.

ANEXO I
1990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

DOTACION DE PROYECTOS.-FCI 90

(en millones de ptas.)

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
1	Espacios naturales protegidos	23	—	23
2	Ordenación y mejora de pastos	110	—	110
3	Forestaciones	333	—	333
4	Tratamientos selvicolas	327	—	327
5	Vias forestales	126	—	126
6	Transformación y mejora regadios	779	(96)	683
7	Mataderos	200	(100)	100
8	Infraestructura agraria	2.030	96	2.126
9	Residencias Universitarias	250	(250)	—
10	Mini-residencias tercera edad	142	—	142
11	Construcción cc.ss.pp.	226	—	226
12	Construcción centros salud	200	—	200
13	Casas cultura	463	—	463
14	Infraestructura deportiva	1.386	—	1.386
15	Biblioteca de proyectos infraest.	20	—	20
16	Obras infr.en abastc. aguas	3	—	3
17	C-400 de la Ab-140 a Tomelloso	100	—	100
19	Acondic. Ab-500	92	—	92
21	Acondic. CR-712	70	—	70
24	CR-731 (C-403 a C.Real)	242	(29)	213
27	C-641 (Villahermosa-CR-631)	78	—	78
28	CR-731 (403 a C.Real)2º Tramo	67	—	67
29	C-202 (Cañamares-Vadillos)	121	—	121
30	GU-977 (Villanueva Alc. Peñalen)	120	—	120
31	C-401 (Galvez-Navahermosa)	61	—	61
32	C-502 (p.k. 150,6 al 161,3)	145	—	145
33	Marquesinas y microest.autobuses	77	(14)	63
34	Supresión paso nivel Cuenca	26	(26)	—
35	Vertederos R.S.U.	101	—	101
36	Constrc.viviendas Albacete 321	705	(133)	572
37	Constrc.viviendas C.Real 709	1.553	(89)	1.464
38	Constrc.viviendas Cuenca 12	48	12	60
39	Constrc.viviendas Guadalj. 66	221	(116)	105
40	Constrc.viviendas Toledo 359	882	(118)	764
41	Creación infraestrc.turistica	96	—	96
42	Creación infraestrc.turistica	114	—	114
43	Varios (viviendas)	—	445	445
44	CR-161 (p.k. 0 al 27,3)	—	38	38
45	C-415 (Villanueva-L.p.Albacete	—	130	130
46	CR-110 (Alcazar-Miguel Esteban)	—	119	119
47	Modif.compl.liq.carreteras	—	29	29
48	Modif.compl.liq.transporte	—	1	1
49	C-3211 Albacete-El Salobral	—	100	100
TOTAL		11.526	—	11.526

ANEXO II
1990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.- PROYECTOS FCI/90

(En millones de pesetas y %)

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION	PAGADO
16	Obras infr.en abastc. aguas	3			
17	C-400 de la Ab-140 a Tomelloso	100	11	11	11
19	Acondic. Ab-600	92	48	52	39
21	Acondic. CR-712	70	62	89	62
24	CR-731 (C-403 a C.Real)	213	200	94	187
27	C-641 (Villahermosa-CR-631)	78	78	100	78
28	CR-731 (403 a C.Real)2º Tramo	67	47	70	47
29	C-202 (Cañamares-Vadillos)	121	112	93	112
30	GU-977 (Villanueva Alc. Peñalen)	120	36	30	
31	C-401 (Galvez-Navahermosa)	51	51	100	51
32	C-502 (p.k. 150,6 al 161,3)	145	145	100	138
33	Marquesinas y microest.autobuses	63	34	54	21
35	Vertederos R.S.U.	101			
36	Constrc.viviendas Albacete 321	572	258	45	227
37	Constrc.viviendas C.Real 709	1 464	727	50	657
38	Constrc.viviendas Cuenca 12	60	49	82	49
39	Constrc.viviendas Guadalj. 66	105	10	10	7
40	Constrc.viviendas Toledo 359	764	496	65	449
43	Varios (viviendas)	445	159	36	129
44	CR-151 (p.k. 0 al 27,3)	38	38	100	38
45	C-416 (Villanueva-l.p.Albacete	130	130	100	130
46	CR-110 (Alcazar-Miguel Esteban)	119	119	100	69
47	Modif.compl.liq.carreteras	29	—	—	—
48	Modif.compl.liq.transporte	1	—	—	—
49	C-3211 Albacete-El Salobral	100	—	—	—
	Consejeria Politica Territorial	5.051	2.810	56	2.501

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION	PAGADO
41	Creación infraestrc.turistica	96	96	100	96
42	Creación infraestrc.turistica	114	106	93	62
	Consejeria de Industria y Turismo	210	202	96	158

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION	PAGADO
01	Espacios naturales protegidos	23	21	91	19
02	Ordenación y mejora de pastos	110	32	29	13
03	Forestaciones	333	161	48	75
04	Tratamientos selvicolas	327	312	95	106
05	Vias forestales	126	100	79	30
06	Transformación y mejora regadios	683	440	64	230
07	Mataderos	100			
08	Infraestructura agraria	2 126	1 928	91	1 314
	Consejeria de Agricultura	3 828	2 994	78	1 787

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION	PAGADO
13	Casas cultura	463	168	36	97
14	Infraestructura deportiva	1 386	1 001	72	876
16	Biblioteca de proyectos infraest.	20	14	70	12
	Consejeria de Educación	1 869	1 183	63	985

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION	PAGADO
10	Mini-residencias tercera edad	142	33	23	33
11	Construcción cc.ss.pp.	226	45	20	32
12	Construcción centros salud	200	84	42	78
	Consejeria de Sanidad y Bienestar Social	568	162	29	143
	TOTAL	11.526	7.351	64	5.574

ANEXO III
1990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

CLASIFICACION POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO 1990

(en millones de pesetas)

	Obras Públicas	Agricultura, Pesca y Ganaderia	Vivienda	Transportes y Comunicaciones	Sanidad	Educación	Otras obras Infraestructura	Totales
FCI. 1990	1 077	2 994	1 699	34	162	1 183	202	7.351
FCI. 1989	109	378	2	—	—	—	—	489
TOTAL...	1 186	3 372	1 701	34	162	1 183	202	7.840

CASTILLA Y LEON

INFORME SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

CASTILLA Y LEON

EJERCICIO 1990

INDICE

I.- INTRODUCCION

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI
III.1.- CREDITOS GESTIONADOS
A) CREDITOS INICIALES
B) CREDITOS INCORPORADOS

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

V.- CONCLUSIONES

ANEXOS

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, y en el artículo 9 de la Ley 29/1990, del Fondo de Compensación Interterritorial, ha efectuado la fiscalización de los proyectos financiados con cargo al citado Fondo y gestionados por la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los trabajos y procedimientos realizados dentro de los planes generales de fiscalización de este Tribunal.

I.- INTRODUCCION

La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial -en adelante FCI- es la norma fundamental que regula este instrumento financiero de las Comunidades Autónomas, ya que en ella se recogen y articulan los principios constitucionales y disposiciones básicas que se contemplan en el artículo 158 de la Constitución Española, y en el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de dichas Comunidades (LOFCA).

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI, ha sido derogada con efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 29/1990, de 27 de diciembre, que recoge el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, de aplicación durante el ejercicio 1990, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1990 establece que los proyectos de inversión del Fondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecución a su entrada en vigor (28 de diciembre de 1990), se regirán por la Ley 7/1984.

Entre los cambios más significativos que aporta la nueva Ley del FCI, destacan los siguientes:

- La determinación de los territorios beneficiarios del FCI, que serán sólo las Comunidades Autónomas de menor desarrollo económico dentro del Estado.

- El destino de los recursos del FCI, disponiéndose que se apliquen a financiar proyectos que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza.

- La armonización de las necesidades de tesorería de la Hacienda Central con las de las Comunidades Autónomas.

Estas reformas, además de adecuar el FCI a los principios constitucionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios sustentados por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 63/1986 y 183/1988, por las que se declara inconstitucional el artículo 10.2 de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor agilidad a las Comunidades Autónomas para la solicitud y percepción de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990 recoge definitivamente el principio de automaticidad de la incorporación de remanentes de créditos, los cuales quedan afectos a la ejecución del respectivo proyecto de inversión, o del que le sustituya, de conformidad con el artículo 16.5 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Artículo 7.5).

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, establece una "Compensación Transitoria" para los ejercicios 1990 y 1991, en tanto no se revise el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, con el caracter de financiación incondicionada.

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verificar la regularidad contable de los créditos del FCI gestionados por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, comprobando su imputación al periodo y conceptos que les corresponden.

2.- Verificar la regularidad legal de las actuaciones realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta a:

- Naturaleza de los gastos realizados.
- Adecuación de las modificaciones realizadas a la normativa aplicable.
- Aplicación de la contabilidad analítica a los proyectos del FCI, de conformidad con su Ley reguladora.
- Adecuación de los gastos realizados a la finalidad señalada por la Ley del Fondo.

3.- Determinación de la ejecución de los proyectos financiados con el FCI.

B) ALCANCE

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las dotaciones del FCI para 1990. La fiscalización se ha realizado de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican a continuación.

C) LIMITACIONES

La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabilidad analítica que establece el artículo 9.3 de la Ley 29/1990, por lo que no es posible determinar objetivamente los costes imputables a cada proyecto, ni las unidades físicas de realización mas significativas.

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI

III.1.- CREDITOS GESTIONADOS

A) Créditos iniciales

Los créditos que figuran asignados a la Comunidad en la Sección 33 de los Presupuestos ascienden a 18.302 millones de pesetas, de los cuales 7.972 millones corresponden a la financiación de los proyectos acordados y 10.330 millones a la Compensación Transitoria.

El crédito inicial del FCI de 1990 para esta Comunidad, excluida la citada Compensación Transitoria, respecto al ejercicio 1989 representa una minoración del 33%.

B) Créditos incorporados

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Ley del FCI, se han incorporado remanentes de crédito del FCI/89 por importe de 4.365 millones de pesetas, por lo que el crédito disponible en esta Comunidad asciende a 12.337 millones de Ptas. La Comunidad no ha incorporado 19 millones de pesetas correspondientes al FCI de 1989.

La distribución de los remanentes incorporados por los distintos fondos a los que están afectados, es la siguiente:

(en millones de pesetas)

FCI/1989	3.598
FCI/1988	381
FCI/1987	291
RESTO FCIS	95
TOTAL	4.365

Asímismo no ha incorporado otros 922 millones de pesetas correspondientes a créditos del ejercicio 1989, que se declararon no disponibles en ese ejercicio por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 1989.

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

El Anexo I presenta la relación de los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990.

Durante el ejercicio 1990 han tenido lugar modificaciones que han afectado a los proyectos de inversión acordados que se recogen también en el anexo citado, siendo el resumen de las situaciones que presenta el siguiente:

SITUACION	Nº	Dotación Inicial (mill. Ptas.)	Nº	Dotación Final (mill. Ptas.)
Proyectos que no varían	3	220	3	220
Proyectos sustituidos	68	5.455	-	--
Proyectos nuevos	-	--	103	5.374
Proyectos modificados	14	2.297	14	2.378
TOTAL	85	7.972	120	7.972

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

A) Grado de Ejecución del FCI

El grado de ejecución global del FCI es del 58%. Su distribución por los distintos Fondos a los que afecta, es la siguiente:

FCI	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION
1990	7.972	4.547	57%
1989	3.598	2.301	64%
1988	381	204	53%
1987	291	76	26%
RESTO FCIS	95	33	35%
TOTAL	12.337	7.161	58%

Los pagos por estas obligaciones ascienden a 7.159 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 100%.

En cuanto a Presupuestos cerrados, la Comunidad ha realizado pagos por importe de 197 millones de pesetas, restando 997 millones. [1]

B) Grado de ejecución del FCI de 1990

El grado de ejecución correspondiente a los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990 se presenta en el anexo II.

Un análisis del mismo pone de manifiesto las particularidades siguientes:

a) De los 120 proyectos, 31 no presentan ejecución alguna, los créditos de dichos proyectos suponen el 21% del total del FCI de 1990.

b) Se han ejecutado totalmente 56 proyectos, que representan el 31% de los créditos.

c) La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presenta un grado de ejecución global del 19%, sensiblemente menor al resto de las Consejerías que han gestionado FCI durante 1990.

d) Los pagos correspondientes a proyectos vinculados al FCI de 1990 ascienden a 4.547 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 100%.

C) Distribución Sectorial de las Inversiones

El Anexo III muestra el importe total a que ascienden las obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio, clasificadas por aquellos sectores de inversión más relevantes entre los citados en el artículo 16.2 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), con especial significación del sector de Obras Públicas, que concentra el 49% del total de obligaciones reconocidas.

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

La Administración Central ha continuado exigiendo en el presente año a las Comunidades Autónomas todas las formalidades requeridas con anterioridad a las sentencias del Tribunal Constitucional. Consecuentemente, en el ejercicio 1990 esta Comunidad ha reconocido derechos por importe de 8.363 millones de pesetas quedando pendiente de cobro al cierre del ejercicio 5.469 millones, después de haber cobrado 2.894 millones.

El detalle de los derechos reconocidos por los Fondos a los que afecta es el siguiente:

(en millones de pesetas)

DERECHOS RECONOCIDOS	IMPORTE
FCI/1990	7.972
FCI/1989	355
FCI/1988	9
FCI/1987	19
RESTO FCIS	8
TOTAL	8.363

Respecto a la Compensación Transitoria, de los 10.330 millones de pesetas consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 1990, ha ingresado 8.608 millones, restando un pendiente de cobro de 1.722 millones de pesetas, que corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 1990.

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

A) Proyectos núms. 79 Y 87 Consejería de Fomento [2]

B) Proyectos núms. 162 - 163 - 164 - 177 - 180 - 182 Consejería de Fomento

[1] Nueva redacción en virtud de alegaciones.

[2] Suprimido en virtud de alegaciones.

[3] Suprimido en virtud de alegaciones.

c) Proyectos sin ejecución

El examen del anexo II pone de manifiesto que 36 proyectos no han tenido ejecución alguna, correspondiendo 35 de ellos a la Consejería de Fomento y uno a la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
De los 36 proyectos citados, treinta de ellos sustituyeron a otros proyectos inicialmente acordados.

V.- CONCLUSIONES

- La Comunidad no suministra información contable analítica en los términos que dispone el artículo 9.3 de la vigente Ley del Fondo, por lo que se reitera la obligatoriedad de adoptar las medidas oportunas para la aplicación del sistema contable prescrito en la Ley, a los efectos de posibilitar el control de la ejecución de todos los proyectos vinculados al FCI (Epígrafe II.C).

- No se ha incorporado la totalidad de los remanentes de crédito vinculados a FCI de ejercicios anteriores (Epígrafe III.1.B).

- A 31 de diciembre de 1990 el grado de ejecución del FCI es del 58%. No obstante, respecto a proyectos vinculados al FCI de 1990, existen proyectos que no han tenido ejecución alguna, o ésta es poco significativa. (Epígrafe III.3).

Madrid, 21 de diciembre de 1993
PRESIDENTE,

Fdo: Adolfo Carretero Pérez

ANEXO I
1.990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
DOTACION DE PROYECTOS - FCI/90
(en millones de pesetas)

L.P.G Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
1	BU-120 ARANDA-ROA	69	(69)	--
2	BU-550 TRESPADERNE-R. LOSA	70	(70)	--
3	ACONDICIONAMIENTO PUENTES BU-4. BU-7	16	(16)	--
4	LE-1-SUPRESION PASO A NIVEL	17	(17)	--
6	SG-5-C-114-AYLLON-L.P.BURGOS	87	(87)	--
7	SO-3-C-116 FUENTETOVAR-ALMAZAN	70	(70)	--
8	SO-100-NAVALCABALLO-QUINTANA	50	(50)	--
9	SO-132-MEDINACELI-BARAHONA	52	(52)	--
11	BU-11.BU-5. PEÑAHORADA-HONTOMIN	46	(46)	--
12	BU-13-C-629 VILLARCAYO-EL CRUCERO	89	(89)	--
14	LE-6-PUENTE S/RIO ESLA	35	(35)	--
15	P-2-VARIANTE REINOSO DEL CARRETO	4	(4)	--
19	SG-342.CUELLAR-NAVA	68	(68)	--
20	SG-4-C-114-VARIANTE DE AYLLON	36	(36)	--
21	SG-2-CL-601-ACCESO A SEGOVIA	39	(39)	--
23	SG-1-ACCESOS A ALMAZAN	38	(38)	--
24	VA-9-C-112-OLMEDO-ISCAR	93	(93)	--
25	VA-2-VILLALON-L.P. PALENCIA	105	(105)	--
26	ZA-2-C-527. ZAAMORA P.K. 12,00	48	(48)	--
27	ZA-3-C-605-ZAMORA-EL PIÑERO	89	(89)	--
28	AV-5 y 11-C-403-A CEBREROS	50	(50)	--
29	P-10 y 13-C-617-VILLALOBON-ASTUDILLO	44	(44)	--
30	VA-8-C-610-VALLADOLID	38	(38)	--
33	SA-5.2M MODIF. SALAMANCA-ALMC.	7	(7)	--
34	VA-4M. MODIF. VALLADOLID-ARCAS REALES	6	(6)	--
35	VA-5M. MODIF. ARCAS REALES-C.SIMANCAS	7	(7)	--
36	AV-4M. MODIF. HOYO NAVALPERAL	18	(18)	--
37	BU-3M. MODIF. TRESPADERNE-R.LOSA	23	(23)	--
63	193 VIVIENDAS EN AVILA	316	(316)	--
64	316 VIVIENDAS EN BURGOS	440	(440)	--
65	271 VIVIENDAS EN LEON	340	(340)	--
66	186 VIVIENDAS EN PALENCIA	259	(259)	--
67	148 VIVIENDAS EN SALAMANCA	182	(182)	--
68	160 VIVIENDAS EN SEGOVIA	259	(259)	--
69	219 VIVIENDAS EN SORIA	357	(357)	--
70	270 VIVIENDAS EN VALLADOLID	310	(310)	--
71	64 VIVIENDAS EN ZAMORA	50	(50)	--
72	21.LE-063 LEON CONDUCCION	207	(2)	205
73	21-LE-064 LEON ESTACION TRATAMIENTO	140	--	140
74	22-SG-055-RIAZA-PRESA	12	(12)	--

L.P.G Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
76	22-AV-019 GALLEGOS DE S. PRESA	25	(25)	--
77	22-AV-056 CEBREROS DEPOSITOS	79	79	158
78	22-AV-084 LA ADRADA CONDUCCION Y TRATAMIENTO	52	51	103
79	21-LE-022 PONFERRADA EST. TRATAMIENTO	40	--	40
80	21-LE-066 LEON ENLACE	150	150	300
81	22-LE-106 PUENTE DOMINGO FLOREZ ABASTECIMIENTO	13	(13)	--
82	22-SG-111 MANCOM. LA ATALAYA CONDUCCION	40	--	40
83	22-SG-119 EL ESPINAR CONDUCCION	125	(9)	116
86	22-LE-112 ASTORGA. ABASTECIMIENTO	10	(10)	--
87	VA-017 VALLADOLID-DEPOSITO	20	(20)	--
88	AVILA E.D.A.R. (ESTACION DEPURADORA AGUAS RES.)	200	(200)	--
89	SORIA E.D.A.R.	200	(200)	--
92	VILLARCAYO E.D.A.R.	30	(30)	--
95	CIUDAD RODRIGO E.D.A.R.	75	(75)	--
104	DEPURACION VERTIDOS EMBALSE RIAÑO	30	(30)	--
106	EMISARIO E.D.A.R. DE LA BAÑEZA	25	(25)	--
107	EMISARIO E.D.A.R. DE VALLADOLID	50	(50)	--
108	EMISARIO E.D.A.R. DE MIRANDA DE EBRO	25	(25)	--
109	EMISARIO E.D.A.R. DE MEDINA DE POMAR	25	(25)	--
110	EMISARIO E.D.A.R. DE NAVAS DEL MARQUES	40	(40)	--
111	EMISARIOS Y E.D.A.R. DEL BARCO DE AVILA	20	(20)	--
127	LUCHA CONTRA LA EROSION. AVILA	22	(22)	--
128	LUCHA CONTRA LA EROSION. BURGOS	50	(50)	--
129	LUCHA CONTRA LA EROSION. LEON	83	(83)	--
130	LUCHA CONTRA LA EROSION. PALENCIA	39	(39)	--
131	LUCHA CONTRA LA EROSION. SALAMANCA	22	(22)	--
132	LUCHA CONTRA LA EROSION. SEGOVIA	22	(22)	--
133	LUCHA CONTRA LA EROSION. SORIA	28	(28)	--
134	LUCHA CONTRA LA EROSION. VALLADOLID	28	(28)	--
135	LUCHA CONTRA LA EROSION. ZAMORA	39	(39)	--
139	REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS COMPL. PALENCIA	90	(90)	--
140	REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS COMPL. SALAMANCA	77	(77)	--
141	REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS COMPL. SEGOVIA	65	(65)	--
142	REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS COMPL. SORIA	110	(110)	--
143	REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS COMPL. VALLADOLID	65	(65)	--
144	REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS COMPL. ZAMORA	88	(88)	--
146	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. AVILA	170	(74)	96
147	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. BURGOS	300	17	317
146	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. LEON	150	(10)	140
146	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. PALENCIA	54	(14)	40
146	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. SALAMANCA	260	72	332
146	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. SEGOVIA	200	21	221
146	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. SORIA	200	(117)	83
146	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. VALLADOLID	100	(15)	85
154	OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. ZAMORA	250	(68)	182
155	SECANO. BIENES USO GENERAL S.P.	--	198	198
156	SECANO. BIENES USO GENERAL S.P.	--	200	200
157	REGADIO. BIENES USO GENERAL LEON	--	165	165
158	BEJAR Y LEDRADA. ABASTECIMIENTO	--	36	36
159	ZAMORA ABASTECIMIENTO	--	10	10
160	CAMPO ARGAGAN. ABASTECIMIENTO	--	25	25
161	ACOND. PLATAFORMA AV. 55. TRAMO N-401 A CEBREROS	--	33	33
162	PUENTE S/R. URBEL Y S/R. UBIERNA. BU-601 Y 622	--	16	16
163	MEJ. PLATAF. BU-550 DE TRANSPADERNE-ARCENIEGA	--	70	70
164	MEJ. PLATAF. BU-120 DE N-122 A ROA DE DUERO	--	69	69
165	VARIANTE HONTOMIN C-629	--	30	30

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
166	ACONDICTO. PLATAF. C-629. VILLARCAYO A CRUCERO	--	89	89
167	SUPRESION PASO A NIVEL C-631	--	17	17
168	ACCESO A LEON C-623 Y C-630	--	29	29
169	ACONDTO. PLATAF. LE-331	--	112	112
170	ACONDTO. ENSANCHE DE PUENTE S/R. ESLA C-621	--	27	27
171	COMPLEMENTARIO NUEVA CRTA. L-451. ASTORGA	--	4	4
172	VARIANTE REINOSO DEL CERRATO	--	1	1
173	MEJORA PLATAFORMA Y FIRME C-617	--	30	30
174	ACCESO A SALAMANCA S-814	--	44	44
175	ACONDTO. DE TRAZADO C-515	--	8	8
176	MEJORA PLATAF. C-517. FREGENEDA-MAELLE V.	--	62	62
177	MEJORA FIRME C-114 AYLLON-BURGOS	--	88	88
178	MEJORA PLATAF. SG-342	--	47	47
179	PROYECTO REFORMADO VARIANTE AYLLON C-114	--	11	11
180	MEJORA FIRME SO-100 NAVALCABALLO-QUINTANA	--	50	50
181	MEJORA PLATAFORMA SO-132 8 LONG. 25'10 KM)	--	52	52
182	ACONDICIONAMIENTO TRAZADO C-116	--	70	70
183	MEJ. PLATAF. SO-101-FUENTE PINILLA-QUINTANA R.	--	85	85
184	ACCESOS A ALMAZAN C-101 Y C-116	--	90	90
185	ACOND. FIRME CON RENOV. C-601	--	77	77
186	ACOND. PLATAF. C-610 DE VALLADOLID	--	21	21
187	ACOND. PLATAF. C-112 SEGOVIA N-601	--	73	73
188	ACOND. PLATAF. C-527 ZAMORA-BERMILLO	--	45	45
189	ACOND. TRAZADO C-527	--	36	36
190	ACOND. TRAZADO C-605 ZAMORA-EL PIÑERO	--	88	88
191	RENOV. Y REGULAR FIRME C-505	--	47	47
192	CONSERV. PREV. AV-800-AV-801-AV-100 ETC.	--	76	76
193	MODIF. ACONDICIONA. TRAZADO AV-502	--	13	13
194	MODIF. ACONDICIONA. TRAZADO AV-923	--	9	9
195	COMPLEMENTARIO CON LA C-501-POYALES DEL HOYO	--	4	4
196	LIQUIDACION NUEVO ACCESO AREVALO C-605	--	7	7
197	MEJORA PLATAF. BU-741	--	115	115
198	MEJORA PLATAF. BU-550	--	98	98
199	MEJORA PLATAF. BU-120 DE N-120 A R.O.A.D.	--	19	19
200	MODIFICADO MEJORA PLATAF. BU-550	--	25	25
201	COMPLEM. MEJORA PLATAF. BU-550	--	6	6
202	COMPLEM. 2 MEJORA PLATAF. BU-500	--	28	28
203	MODIF. ACOND. PLATAF. BU-622	--	14	14
204	MODIF. PUENTE S/R. URBEL EN LA BU-601	--	3	3
205	ACONDICIONAMIENTO PLATAF. NUEVO PUENTE LE-331	--	86	86
206	ACONDICIONAMIENTO PLATAF. EN LA C-631	--	61	61
207	ACONDICIONAMIENTO PLATAF. EN LA C-623	--	98	98
208	MODIFICADO SUPRESION PASO A NIVEL C-631	--	7	7
209	MEJORA PLATAF. EN LA C-627	--	40	40
210	MEJORA PLATAF. EN LA C-624	--	48	48
211	MODIF. ACONDIC. TRAZADO EN LA C-619	--	12	12
212	MODIF. ACONDIC. PLATAFORMA C-615	--	6	6
213	LIQUIDACION ACOND. TRAZADO P-622	--	11	11
214	LIQUIDACION ACOND. TRAZADO Y PLATAF. C-619	--	1	1
215	LIQUIDACION ACOND. TRAZADO Y PLATAF. C-619	--	1	1
216	LIQUIDACION MEJORA PLATAF. EN P-212	--	1	1
217	LIQUIDACION MEJORA PLATAF. EN P-233	--	3	3
218	REGULACION Y RENOVACION FIRME C-517	--	28	28
219	ACONDICIONAMIENTO TRAZADO EN LA C-500 ALBA TORMES	--	96	96
220	ACONDICIONAMIENTO TRAZADO EN LA C-500 AVILA N-630	--	22	22
221	MEJORA PLATAF. Y FIRME SA-810-811-812	--	67	67

L.P.G Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
222	MODIF. ACOND. TRAZADO SA-114	--	3	3
223	LIQUID. ACOND. PLATAF. SA-300	--	2	2
224	LIQUID. ACOND. PLATAF. C-519	--	3	3
225	REGUL. Y RENOV. FIRME SG-211	--	78	78
226	MODIFICADO MEJORA FIRME C-114 AYLLON	--	23	23
227	MODIFICADO ACOND. TRAZADO C-114 ALCOLEA P.	--	17	17
228	ACONDICIONAMIENTO PLATAF. EN C-116	--	86	86
229	MEJORA PLATAF. Y FIRME SO-920	--	49	49
230	MODIF. ACOND. TRAZADO C-116	--	17	17
231	MODIF. FIRME SO-100	--	13	13
232	LIQUIDACION ACOND. PLATAF. C-116	--	6	6
233	ACOND. PLATAF. Y NUEVO PUENTE S/R ADAJA	--	98	98
234	MODIF. ACOND. PLATAF. C-610	--	5	5
235	MODIF. MEJORA PLATAF. VA-514-C-601	--	8	8
236	RENOV. Y REGULAR. FIRME VA-932-933-934-ETC	--	43	43
237	REGULACION Y RENOVACION FIRME ZA-N-122	--	21	21
238	ACONDIC. TRAZADO C-605 FUENTESAUCO-PIÑERO	--	57	57
239	MEJORA PLATAF. ZA-713. TORO-FUENTESECAS	--	32	32
240	MEJORA PLATAF. ZA-713-ZA-714	--	30	30
241	MODIF. ACOND. PLATAF.EN C-612-PALENCIA	--	9	9
242	MODIF. ACOND. PLATAF. EN C-612-VALLADOLID	--	8	8
243	MODIF. ACOND. SUPERF. FIRME ZA-621-620-ETC.	--	6	6
244	LIQUIDACION MEJORA PLATAF. C-519	--	1	1
245	TERMINALES MERCANCIAS EN BURGOS CAPITAL	--	143	143
246	TERMINALES MERCANCIAS EN BENAVENTE (ZA)	--	148	148
247	LIQUIDACION EXCESO HONOTARIOS PROYECTOS	--	47	47
248	TERMINAL MERCANCIAS SIN PROVINCIALIZAR	--	153	153
249	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. AVILA	--	123	123
250	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. BURGOS	--	139	139
251	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. LEON	--	269	269
252	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. PALENCIA	--	128	128
253	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. SALAMANCA	--	79	79
254	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. SEGOVIA	--	79	79
255	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. SORIA	--	84	84
256	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. VALLADOLID	--	84	84
257	RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. ZAMORA	--	123	123
	T O T A L	7.972	--	7.972

ANEXO II
1.990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO PROYECTOS FCI/90
(en millones de pesetas)

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
CONSEJERIA 03, AGRICULTURA Y GANADERIA					
146	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. AV.	96	82	85	82
147	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BV.	317	290	91	290
148	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. LE.	140	73	52	73
149	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. PA.	40	7	17	7
150	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. SA.	332	271	83	271
151	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. SG.	221	167	76	167
152	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. SO.	83	81	98	81
153	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. VA.	85	22	26	22
154	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. ZA.	182	146	80	146
155	SECANO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. SP.	198	125	63	125
156	REGADIO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. SP.	200	167	83	167
157	REGADIO. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL SP.	165	83	50	83
TOTAL CONS. AGRICULTURA Y GANADERIA		2.059	1.514	74	1.514

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
CONSEJERIA 04, FOMENTO					
072	LEON. CONDUCCION	205	205	100	205
073	LEON. ESTACION TRATAMIENTO	140	38	27	38
074	RIAZA. PRESA	-	-	-	-
076	GALLEGOS DE S. PRESA	-	-	-	-
077	CEBREROS. DEPOSITOS	158	102	65	102
078	LA ADRADA. CONDUC. Y TRATAMIENTO	103	101	98	100
079	MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO EN C-619, P.K. 51.280 AL P.K. 54,112. CEVICO NAVERO. ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-619 P.K. 54,112 AL P.K. 63,000 CEVICO-BALTANAS	40	-	-	-
080	LEON. ENLACE	300	300	100	300
081	FUENTE DE DOMINGO FLOREZ. ABASTECIMIENTO	-	-	-	-
082	MANCOMUNIDAD LA ATALAYA. CONDUC.	40	-	-	-
083	EL ESPINAR. CONDUCCION	116	116	100	116
086	ASTORGA. ABASTECIMIENTO	-	-	-	-
087	ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-500 P.K. 0,000 AL 27,350. TRAMO: ALBA DE TORMES-L.P. AVILA	-	-	-	-
158	BEJAR Y LEDRADA. ABASTECIMIENTO.	36	-	-	-
159	ZAMORA. ESTACION TRATAMIENTO	10	-	-	-
160	CAMPO ARDAGAN. ABASTECIMIENTO	25	-	-	-
161	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA AV. 551 P.K. 83.47 AL P.K. 95,97 TRAMO: N-403 A CEBREROS	33	33	100	33
162	FUENTE S/R URBEL EN LA NUEZ DE ARRIBA BU-601 P.K. 23,5 ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS DE FABRICA C-110 DE SALAS DE LOS INFANTESA PALENCIA P.K. 3,480 AL P.K. 38,010	16	19	119	19
163	MEJORA DE PLATAFORMA DE LA BU-550 DE TRESPADERNE A ARCENIEGA P.K. 0,0 AL P.K. 21,200	70	100	143	100
164	MEJORA DE PLATAFORMA DE LA BU-120 DE N-122 A ROA DE DUERO P.K. 0,0 AL P.K. 21,200	69	88	126	88
165	VARIANTE DE HONTOMIN C-629 P.K. 26,5 AL P.K. 28,0. ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA c-629 P.K. 16,150 al 26,500 PEÑARANDA-HONTOMIN	30	23	77	23

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
166	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-629 P.K. 75,0 AL P.K. 89,750. VILLARCAYO-EL CRUCERO	89	89	100	89
167	SUPRESION DEL PASO A NIVEL C-631 P.K. 38,0 SANTA CRUZ DEL SIL	17	-	-	-
168	ACCESO A LEON C-623 P.K. 0,9 AL P.K. 2,075. ACCESO A LEON N-630 P.K. 0,0 P.K. 1,650	29	29	100	29
169	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LE-331 P.K. 8,150 AL P.K. 21,700. VALDECASTILLO-EMBALSE DE PORMA NORTE.	112	112	100	112
170	ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE DE PUENTE S/R ESLA C-621. VALENCIA DE D. JUAN.	27	27	100	27
171	COMPLEMENTARIO DE NUEVA CARRETERA LE-451 DE ASTORGA A PANDORADO	4	4	100	4
172	VARIANTE DE REINOSO DEL CERRATO C-619 P.K. 75,0 AL P.K. 78,5	1	1	100	1
173	MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME C-617 P.K. 11,5 AL P.K. 29,0. VILLAJIMENA-ASTUDILLO. MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME C-617 P.K. 3,0 AL P.K. 11,5 VILLALOBON-VILLAJIMENA	30	30	100	30
174	ACCESO A SALAMANCA s-814 P.K. 1,550 AL P.K. 2,400	44	44	100	44
175	ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-515 P.K. 25,500 AL P.K. 33,500	8	8	100	8
176	MEJORA DE PLATAFORMA C-517 FREGENEDA -MAELLE DE VEGA DE TERRON P.K. 111,0 AL P.K. 121,000	62	62	100	62
177	MEJORA DE FIRME C-114 AYLLON-L.P. BURGOS	88	109	124	109
178	MEJORA DE PLATAFORMA SG-342 P.K. 0,0 AL P.K. 32,7. CUELLAR-NAVA DE LA ASUNCION	47	41	87	41
179	PROYECTO REFORMADO VARIANTE DE LA TRAVESIA DE AYLLON POR LA C-114 DE ALCOLEA DEL PINAR A ARANDA DE DUERO	11	11	100	11
180	MEJORA DEL FIRME SO-100 NAVALCARNERO -QUINTANA P.K. 8,802 AL P.K. 16,755 (INCLUYE PASO SOBRE P.C.)	50	63	126	63
181	MEJORA DE PLATAFORMA SO-132 (LONG. 25,10 KM.) MEDINACELI-BARAHONA	52	52	100	52
182	ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-116 P.K. 26,0 AL P.K. 47,800. FUENTETOVAR -ALMAZAN	70	87	124	87
183	MEJORA DE PLATAFORMA EN LA SO-101 FUENTEPINILLA-QUINTANA REDONDA.P.K. 28,728 AL P.K. 13,345. MEJORA DE PLATAFORMA SO-102-C-116 a FUENTEPINILLA P.K. 13,345 AL P.K. 2,600	85	85	100	85

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
184	ACCESOS A ALMAZAN. C-101 y C-116. C-101 DIRECCION GOMARA P.K. 180,9 a 182,3. C-116 DIRECCION MONTEAGUDO	90	89	99	89
185	ACONDICIONAMIENTO DE FIRME CON RENOVACION Y REGULARIZACION C-601 DE FONTESILLAS A RIAGO P.K. 0,000 AL L.P. DE PALENCIA.	77	116	60	46
186	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-601 P.K. 1,800 AL P.K. 3,000 DE VALLADOLID	21	21	100	21
187	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-112 P.K. 15,900 AL P.K. 34,900 L.P. SEGOVIA N-601	73	73	100	73
188	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-527 P.K. 12,000 AL P.K. 17,000 ZAMORA-BERMILLO	45	45	100	45
189	ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-527 P.K. 1,000 AL P.K. 12,000 ZAMORA-BERMILLO	36	36	100	36
190	ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-605 P.K. 1,400 AL P.K. 21,000. ZAMORA-EL PIQUERO	88	12	14	12
191	RENOVACION Y REGULARIZACION DE FIRME C-505 P.K. 48,840 AL P.K. 70,000 TRAMO: L.P. MADRID-LA CAÑADA	47	-	-	-
192	CONSERVACION PREVENTIVA AV-800 AV-801. P.K. 0,00 AL 26,170. TRAMO N-501 A C-605 AV-100 Y AV-111, 40 KM. C-610, 20 KM. REGULACION Y RENOVACION SUPERFICIAL DE FIRME AV-103 y AV-104 P.K. 23,476 AL 32,624. AV-562 P.K. 13,442 al P.K. 27,796 AV-931	76	-	-	-
193	MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO AV-502 P.K. 7,200 AL P.K. 20567 HOYO DE PINARES-NAVALPERAL DE PINARES	13	13	100	13
194	MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO AV-923 P.K. 66,000 AL P.K. 72,500 ARENAS DE SAN PEDRO-VIGA ESQUINADA	9	9	100	9
195	COMPLEMENTARIO EN LA C-501 DE POYALES DEL HOYO A CANDELEDA	4	4	100	4
196	LIQUIDACION NUEVO ACCESO A AREVALO C-605 P.K. 125,752 AL P.K. 127,132	7	7	100	7
197	MEJORA DE PLATAFORMA BU-741 P.K. 18,100 AL P.K. 43,100. TRAMO: TREVIGO-L.P. ALAVA	115	-	-	-
198	MEJORA DE PLATAFORMA BU-550 P.K. 21,200 AL P.K. 31,5 Y DE 35,0 AL 45,0. TRAMO: RIOLOSA ARCENIEGA-L.P. ALAVA	98	-	-	-

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
199	MODIFICADO MEJORA DE PLATAFORMA DE LA BU-120 de N-122 A ROA DE DUERO. P.K. 0,00 AL P.K. 15,750	19	-	-	-
200	MODIFICADO DE MEJORA DE PLATAFORMA DE LA BU-550 DE TRESPADERNE A ARCENIEGA P.K. 0,00 AL P.K. 21,200	25	-	-	-
201	COMPLEMENTARIO DE MEJORA DE PLATAFORMA DE LA BU-550 DE TRESPADERNE A ARCENIEGA P.K. 0,00 AL 21,20	6	-	-	-
202	COMPLEMENTARIO 2 DE MEJORA DE LA PLATAFORMA DE LA BU-550 DE TRESPADERNE A ARCENIEGA P.K. 0,00 AL 21,20	28	-	-	-
203	MODIFICADO ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA BU-622 DE BURGOS A AGUILAR DE CAMPOO P.K. 1,120 AL TRAMO: BURGOS-QUINTANADUEÑAS	14	14	100	14
204	MODIFICADO DE: PUENTE S/R URBEL EN LA BU-601 P.K. 23,5 EN LA NUEZ DE ARRIBA ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE S/R UBIERNA BU-622 P.K. 5,702. ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS DE FABRICA C-110, DE SALAS DE LOS INFANTES A PA.	3	-	-	-
205	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA Y NUEVO PUENTE S/R PORMA. LE-331 P.K. 0,00 AL 8,150 Y AL 33,271 Y 17,035 A 20,134. TRAMO: BOÑAR VALDECASTILLO Y EMBALSE PORMA NORTE A PUEBLA LILLO.	86	-	-	-
206	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-631 P.K. 62,00 AL 66,00 TRAMO VILLABLINO A LE-773 Y C-623 P.K. 86,590 A 91,740. TRAMO: RIOSCURO A C-631	61	-	-	-
207	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-623 P.K. 31,400 A 48,562. TRAMO: PUENTE ORUGO A PIEDRAHITA DE BABIA	98	-	-	-
208	MODIFICADO DE SUPRESION DEL PASO A NIVEL C-631, P.K. 38,00 SANTA CRUZ DEL SIL	7	-	-	-
209	MEJORA DE PLATAFORMA C-627, P.K.69,0 AL 85,0 DE HERRERA DE PISUERGA A OLMOS DE OJEDA	40	-	-	-
210	MEJORA DE PLATAFORMA C-623, P.K. 27,500 AL 36,144. PUEBLA DE VALDIVIA-VALDERRABANO. MEJORA DE PLATAFORMA C-624, P.K.36,144 AL 45,500. VALDERRABANO C-615	48	48	100	48
211	MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO EN C-619, P.K. 51,380 AL P.K. 56,168. NAVERO. ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-619 P.K. 54,112 AL P.K. 63,000. CEVICO NAVERO-BALTANAS	12	12	100	12

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
212	MODIFICADO ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-615. GUARDO-VELILLA RIO CARRION. P.K. 96,00 AL P.K. 99,50	6	6	100	6
213	LIQUIDACION. ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO P-622 P.K. 0,000 AL P.K. 6,000 AGUILAR DE CAMPOO-BASCONES DE VALD.	11	11	100	11
214	LIQUIDACION. ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO Y PLATAFORMA DE C-619 P.K. 43,000 AL 36,000 TORTOLES DE ESGUEVA - L.P.	1	1	100	1
215	LIQUIDACION. ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO Y PLATAFORMA EN C-619 P.K. 43,000 AL 51,380 L.P. CEVICO-NAVERO	1	1	100	1
216	LIQUIDACION DE MEJORA DE PLATAFORMA P-212 P.K. 12,000 AL P.K. 25,000 SALINAS-AGUILAR DE CAMPOO	1	1	100	1
217	LIQUIDACION DE MEJORA DE PLATAFORMA P-233 P.K. 12,000 AL P.K. 29,300 LA PUEBLA DE BALDAVIA-ALAR DEL REY	3	3	100	3
218	REGULACION Y RENOVACION DE FIRME C-517 P.K. 68,000 AL 111,000. TRAMO. VITIGUDINO-LA FREGENEDA.	28	-	-	-
219	ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-510 P.K. 0,000 al 27,350. TRAMO: ALBA DE TORMES-L.P. AVILA	96	93	97	93
220	ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-500 P.K. 4,000 AL 10,500. TRAMO: L.P. DE AVILA A N-630	22	7	32	7
221	MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME SA-810 SA-811 y SA-812. TRAMO: CN-501 A VILLAFLORES (32;100)	67	-	-	-
222	MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO SA-114 P.K. 13,000 AL P.K. 20,000. PUENTE S/R GAMO: PEÑARANDA-ALBA DE TORMES	3	3	100	3
223	LIQUIDACION DE MEJORA DE PLATAFORMA SA-300 P.K. 4,220 AL P.K. 19,25 SALAMANCA-ALMENARA DE TORMES	2	2	100	2
224	LIQUIDACION DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-519 SALAMANCA-MEDINA DE RIOSECO P.K.4.760 AL P.K. 27,572	3	3	100	3
225	REGULACION Y RENOVACION DEL FIRME SG-211 TRAMO. CL-601 A MONZONCILLO REGULACION Y RENOVACION DEL FIRME CL-601 P.K. 89,000 AL 114,000. TRAMO: SEGOVIA-CARBONERO EL MAYOR	78	78	100	78
226	MODIFICADO. MEJORA DE FIRME C-114 AYLLON-L.P. BURGOS	23	-	-	-

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
227	MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-114 DE ALCOLEA DEL PINAR DE ARANDA DE DUERO. P.K. 87,200 AL 108,000. TRAMO: AYLLON -L.P. DE GUADALAJARA	17	16	88	16
228	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-116 P.K. 50,000 AL 68,150. TRAMO: ALMAZAN-ALENTISQUE	86	-	-	-
229	MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME SO-920 P.K. 0,700 AL 15,000. TRAMO: BURGO DE OSMA-UCERO	49	48	96	48
230	MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO DE C-116 P.K. 26,000 AL 47,800. FUENTE-TOBAR-ALMAZAN	17	-	-	-
231	MODIFICADO DE FIRME SO-100. NAVAL-CABALLO-QUINTANA P.K. 8,802 AL 16,755 (INCLUYE EL PASO SOBRE EL F.C.)	13	-	-	-
232	LIQUIDACION ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-116. BURGO DE OSMA A ARIZA. P.K. 5,850 AL P.K. 26,000 TRAMO. VALDENEBRO-FUENTETOBAR	6	6	100	6
233	ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA Y NUEVO PUENTE S/R ADAJA. C-610 P.K. 12,000 AL P.K. 27,000. TRAMO: PUENTEDUERO-SERRADA	98	-	-	-
234	MODIFICADO. ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-610 DE VALLADOLID A PIEDRAHITA P.K. 6,000 AL P.K. 10,000 TRAMO: ARCAS REALES-INTERSECCION CON SIMANCAS	5	5	100	5
235	MODIFICADO. MEJORA DE PLATAFORMA VA-514 CN-601 A TORRELOBATON P.K. 0,000 AL P.K. 24,290. ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESIA ZARATAN, WAMBA Y CASTRODEZA	8	-	-	-
236	RENOVACION Y REGULACION DE FIRME VA-932, 933, 934 Y VA-940, 941 Y 942, P.K. 0,000 AL P.K. 27,000 Y P.K. 0,000 AL 21,300. TRAMO: VILLALOBON-L.P. LEON Y MAYORGA-L.P. LEON	43	-	-	-
237	REGULACION Y RENOVACION DE FIRME ZA-S/C "DE ZAMORA A PORTUGAL POR MOLINA DE SAYAGO" P.K. 0,000 A 29,010. TRAMO: N-122 A FRONTERA PORTUGUESA	21	21	100	21
238	ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-605 P.K. 18,400 AL 35,900. TRAMO: EL PIÑERO-FUENTESAUCO	57	-	-	-
239	MEJORA DE PLATAFORMA ZA-713 P.K. 0,000 AL P.K. 13,000 TORO-FUENTESECAS	32	17	53	17

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
240	MEJORA DE PLATAFORMA ZA-713, ZA-714 P.K. 13,000 AL P.K. 26,000 FUENTESECAS A CASTRONUEVO	30	30	100	30
241	MODIFICADO ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA EN LA C-612. PALENCIA A ZAMORA P.K. 41,000 AL 50,233. TRAMO: SAN MARTIN DE VALDERAUEY A VILLALPANDO	9	9	100	9
242	MODIFICADO. ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-612 P.K. 21,000 AL 32,200 L.P. VALLADOLID-VILLALPANDO	8	8	100	8
243	MODIFICADO. ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIAL DE FIRME. ZA-621, ZA-602 ZA-620, ZA-301 Y ZA-302	6	6	100	6
244	LIQUIDACION MEJORA DE PLATAFORMA C-519 DE SALAMANCA A MEDINA DE RIO SECO P.K. 31,859 AL P.K. 51,661. TRAMO. TORO-L.P. VALLADOLID	1	1	100	1
245	TERMINALES DE MERCANCIAS EN BURGOS CAPITAL	143	-	-	-
246	TERMINALES DE MERCANCIAS EN BENAVENTE (ZAMORA)	148	2	1	1
247	LIQUIDACION EXCESO DE HONORARIOS DE REDACCION DE PROYECTOS EN AVILA LEON, PALENCIA, VALLADOLID Y BENAVENTE (ZAMORA)	47	36	77	36
248	TERMINALES DE MERCANCIAS SIN PROVINCIALIZAR	153	-	-	-
TOTAL CONSEJERIA DE FOMENTO		4.805	2.822	59	2.822

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION	PAGADO
CONSEJERIA 06, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL					
249	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN AV.	123	5	4	5
250	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN BU.	139	24	17	24
251	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN LE.	269	7	3	7
252	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN PA.	128	53	41	53
253	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN SA.	79	1	1	1
254	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN SG.	79	32	42	32
255	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN SO.	84	-	-	-
256	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN VA.	84	58	69	58
257	RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN ZA.	123	31	25	31
TOTAL CONS. M. AMB. Y ORD. TERRITORIO ..		1.108	211	19	211
T O T A L G E N E R A L		7.929	4.547	57	4.547

ANEXO III
1.990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

CLASIFICACION POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 1990

(en millones de pesetas)

AÑOS FCI	OBRAS PUBLICAS	AGRIC. PESCA Y GANADERIA	VIVIENDA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	SANIDAD	EDUCACION	OTRAS OBRAS DE INFRAESTR.	TOTALES
1990	2.784	1.514	---	38	--	--	211	4.547
1989	671	482	436	--	--	--	712	2.301
1988	28	61	46	16	--	--	53	204
1987	3	20	53	--	--	--	--	76
RESTO FCIS	16	3	8	--	--	--	6	33
T O T A L	3.502	2.080	543	54	--	--	982	7.161

EXTREMADURA

INFORME SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

EXTREMADURA

EJERCICIO 1990

INDICE

I.- INTRODUCCION

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI
III.1.- CREDITOS GESTIONADOS
A) CREDITOS INICIALES
B) CREDITOS INCORPORADOS

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

V.- CONCLUSIONES

ANEXOS

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, y en el artículo 9 de la Ley 29/1990, del Fondo de Compensación Interterritorial, ha efectuado la fiscalización de los proyectos financiados con cargo al citado Fondo y gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los trabajos y procedimientos realizados dentro de los planes generales de fiscalización de este Tribunal.

I.- INTRODUCCION

La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial -en adelante FCI- es la norma fundamental que regula este instrumento financiero de las Comunidades Autónomas, ya que en ella se recogen y articulan los principios constitucionales y disposiciones básicas que se contemplan en el artículo 158 de la Constitución Española, y en el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de dichas Comunidades (LOFCA).

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI, ha sido derogada con efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 29/1990, de 27 de diciembre, que recoge el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, de aplicación durante el ejercicio 1990, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1990 establece que los proyectos de inversión del Fondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecución a su entrada en vigor (28 de diciembre de 1990), se regirán por la Ley 7/1984.

Entre los cambios más significativos que aporta la nueva Ley del FCI, destacan los siguientes:

- La determinación de los territorios beneficiarios del FCI, que serán sólo las Comunidades Autónomas de menor desarrollo económico dentro del Estado.
- El destino de los recursos del FCI, disponiéndose que se apliquen a financiar proyectos que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza.
- La armonización de las necesidades de tesorería de la Hacienda Central con las de las Comunidades Autónomas.

Estas reformas, además de adecuar el FCI a los principios constitucionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios sustentados por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 63/1986 y 183/1988, en las que se declara inconstitucional el artículo 10.2 de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor agilidad a las Comunidades Autónomas para la solicitud y percepción de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990 recoge definitivamente el principio de automaticidad de la incorporación de remanentes de créditos, los cuales quedan afectos a la ejecución del respectivo proyecto de inversión, o del que le sustituya, de conformidad con el artículo 16.5 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Artículo 7.5).

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, establece una "Compensación Transitoria" para los ejercicios 1990 y 1991, en tanto no se revise el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, con el caracter de financiación incondicionada.

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verificar la regularidad contable de los créditos del FCI gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, comprobando su imputación al periodo y conceptos que les corresponden.

2.- Verificar la regularidad legal de las actuaciones realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta a:

- Naturaleza de los gastos realizados.
- Adecuación de las modificaciones realizadas a la normativa aplicable.
- Aplicación de la contabilidad analítica a los proyectos del FCI, de conformidad con su Ley reguladora.
- Adecuación de los gastos realizados a la finalidad señalada por la Ley del Fondo.

3.- Determinación de la ejecución de los proyectos financiados con el FCI.

B) ALCANCE

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las dotaciones del FCI para 1990. La fiscalización se ha realizado de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican a continuación.

C) LIMITACIONES

1.- La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabilidad analítica que establece el artículo 9.3 de la Ley 29/1990, por lo que no es posible determinar objetivamente los costes imputables a cada proyecto, ni las unidades físicas de realización mas significativas.

2.- La Comunidad no ha aportado documentación que justifique los motivos por los que ha sustituido, o modificado, los proyectos de inversión relacionados en los Presupuestos

Generales del Estado (artículo 7.4 de la Ley 7/1984 del FCI), lo que limita el conocimiento de las causas que motivan las modificaciones introducidas. [1]

3.- La documentación aportada por la Comunidad relativa a los proyectos fraccionados no permite establecer, en todos los casos, la correspondencia existente entre el proyecto inicialmente acordado y relacionado en los Presupuestos Generales del Estado, con los proyectos en los que se fraccionan, por lo que se limita el conocimiento de las obligaciones reconocidas, los pagos efectuados, así como los grados de ejecución y cumplimiento. [2]

4.- La liquidación rendida de los recursos afectados a los distintos FCI, por operaciones realizadas en 1990, presenta contradicciones entre los derechos reconocidos, los cobros realizados y los importes pendientes de cobro que no han sido aclaradas, por lo que se limita el conocimiento de dichos recursos, tanto en relación al FCI como en lo que hace referencia a la Compensación Transitoria. [3]

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI

III.1.- CREDITOS GESTIONADOS

A) Créditos iniciales

Los créditos que figuran asignados a la Comunidad en la Sección 33 de los Presupuestos ascienden a 15.501 millones de pesetas, de los cuales 10.581 millones corresponden a la financiación de los proyectos acordados y 4.920 millones a la Compensación Transitoria.

El incremento que supone el crédito inicial del FCI de 1990 para esta Comunidad, excluida la citada Compensación Transitoria, respecto al ejercicio 1989, representa un 12%.

B) Créditos incorporados

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Ley del FCI, se han incorporado todos los remanentes de crédito de FCIS anteriores a 1990, por lo que el crédito disponible en esta Comunidad asciende a 18.420 millones de Ptas. No obstante las incorporaciones de remanentes aludidas están sobrevaloradas; la correspondiente a FCI/89, en 568 millones, como consecuencia de la minoración habida por este importe en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 1989. [4]

El crédito registrado por la Comunidad asciende a 21.833 millones de Ptas., estando sobrevalorado, además de en los 568 millones de pesetas anteriormente citados, en 3.413 millones de pesetas, correspondientes a la diferencia entre el crédito inicial consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (10.581 millones de Pesetas) y el crédito inicial registrado por la Comunidad (13.994 millones de pesetas). [5]

La distribución de los remanentes incorporados por los distintos fondos a los que afecta es la siguiente:

(en millones de pesetas)

FCI/1989	4.987
FCI/1988	1.318
FCI/1987	756
Resto Fondos	778
TOTAL	7.839

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

El Anexo I presenta los proyectos de inversión con cargo al FCI de 1990, y ha sido elaborado a partir de la relación que incluye la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Durante el ejercicio 1990 han tenido lugar modificaciones que han afectado a los proyectos de inversión acordados que se recogen también en el anexo citado, siendo el resumen de las situaciones que presenta el siguiente:

SITUACION	Nº	Dotación Inicial (mill. Ptas.)	Nº	Dotación Final (mill. Ptas.)
Proyectos que no varían	63	7.429	63	7.429
Proyectos sustituidos	1	30	-	--
Proyectos nuevos	-	--	2	45
Proyectos modificados	13	3.122	13	3.107
TOTAL	77	10.581	78	10.581

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

A) Grado de Ejecución del FCI

El grado de ejecución global del FCI es del 64%. Su distribución por los distintos Fondos a los que afecta, de acuerdo con la liquidación presentada por la Comunidad, es la siguiente:

(en millones de pesetas)

FCI	CREDITOS FINALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION
1990	13.994	9.036	65%
1989	4.987	3.545	71%
1988	1.318	746	57%
1987	756	377	50%
RESTO FCIS	778	328	42%
TOTAL	21.833	14.032	64%

Los pagos por estas obligaciones ascienden a 10.152 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 72%. En cuanto a Presupuestos cerrados, la Comunidad ha realizado pagos por importe de 2.958 millones de pesetas, representando el 100% del pendiente al inicio del ejercicio.

B) Grado de ejecución del FCI de 1990

El grado de ejecución correspondiente a los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990 se presenta en el anexo II.

De conformidad con el contenido de la limitación nº 3 que figura en el epígrafe II.C), el citado anexo no recoge las obligaciones reconocidas por cada uno de los proyectos vinculados al FCI/1990, ni los pagos realizados sobre dichas obligaciones, por lo tanto, el anexo II ha sido elaborado a partir de los datos aportados por la Comunidad, que tan sólo permiten ofrecer el grado de ejecución distribuido por Consejerías, por lo que su fiabilidad queda limitada.

---

1 Fundamento jurídico rectificado.
Lo que el Tribunal observa es que no constan o son insuficientes los motivos justificativos de las sustituciones efectuadas, aunque éstas hayan sido aprobadas por la Administración Central (alegación 1º.1).

2 Párrafo reformado en virtud de alegaciones.

3 Los datos suministrados por la Comunidad no son coherentes con los reflejados en la liquidación del presupuesto, no habiéndose aclarado las diferencias. Son éstas:

RESUMEN TOTALIZADO DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS AFECTADOS AL FCI POR OPERACIONES REALIZADAS EN 1990 (En millones de Ptas.)

	LIQUIDACIONES PRESENTADAS 1ª VERSION	2ª VERSION	LIQUIDACION FCI CTA.GRAL 1990
Previsión inicial	10.712	13.993	15.495
Incorporaciones	6.455	7.840	7.840
Previsión Final	17.267	21.833	23.333
Derechos Reconocidos	13.911	12.260	23.333
Cobros Realizados	10.005	6.393	9.512
Pendiente de Cobro	3.906	5.867	13.821

4 En la alegación formulada (2ª.1) se evidencia una consciente práctica incorrecta al no haber ajustado los registros contables a los mayores recursos.
Por otra parte, la conservación o pérdida de los Fondos Europeos no puede depender de anotaciones contables no sustentadas ó anómalas.

5 La extensa explicación a este párrafo en el escrito de alegaciones demuestra la falta de adecuación de los créditos a los recursos reales aprobados por la Administración del Estado.

El análisis del anexo citado pone en evidencia la baja ejecución obtenida por las Consejerías de Turismo, Transportes y Comunicaciones (2%), y Presidencia y Trabajo (5%), y Emigración y Acción Social (14%).

C) Distribución Sectorial de las Inversiones

El Anexo III muestra el importe total a que ascienden las obligaciones reconocidas de aquellos sectores de inversión más relevantes entre los citados en el artículo 16.2 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), con especial significación del sector de Obras Públicas, que concentra el 57% del total de obligaciones reconocidas.

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

La liquidación presentada por la Comunidad, en cuanto a derechos se refiere, no ofrece coherencia con los propios datos que recoge, ni guarda uniformidad con la del ejercicio anterior, lo que imposibilita la determinación de dichos derechos. (Apartado II.C.4).

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Los proyectos relacionados en los Presupuestos Generales del Estado para 1990 son fraccionados por la Comunidad en múltiples proyectos que no ofrecen una clara identificación en cuanto a la correspondencia existente entre dichos proyectos fraccionados y los inicialmente acordados. [4]

Este hecho es especialmente significativo dado que limita el conocimiento de si dichos proyectos estan, o no, realmente vinculados al FCI.

Por lo tanto, la información examinada no ofrece garantías suficientes para determinar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley del FCI, en cuanto al destino de los fondos vinculados al Fondo.

Las comprobaciones realizadas sobre la ejecución de los proyectos presentados por la Comunidad ofrece las siguientes particularidades:

a) Proyecto: "EUROAGRO-90"
Clave de Comunidad nº 3.556
Aplicación Presupuestaria 12-03-60007

La documentación examinada presenta un gasto de 3.925.115 pesetas que corresponde a consumos de energía eléctrica, transporte de materiales, derechos de inscripción y ocupación de un stand, en la feria "Euroagro-90".

b) Proyecto: "FIAL-90"
Clave de Comunidad nº 3557
Aplicación presupuestaria 12.03.60007

Los gastos por importe de 2.174.476 pesetas corresponden a suministros de charcutería (jamones, lomos, etc.) y al montaje del stand en la feria "FIAL-90".

c) Proyecto: "Gran Fiesta del Campo"
Clave de Comunidad nº 3754
Aplicación presupuestaria 12-03-60007

Gastos por 2.968.503 pesetas que incluyen conceptos de montaje de stand, transporte de mobiliario y otros gastos no especificados.

d) Proyecto: "FEREX"
Clave de Comunidad nº 4076
Aplicación Presupuestaria 12-03-60007

Gastos por 1.199.125 pesetas que incluyen conceptos de seguros, aparcamiento (abono), limpieza, etc., derivados del stand en la feria "IFEBA".

e) Proyecto: "Calendario Ferias-91-TECNIGRAF"
Clave de Comunidad nº 4072

Aplicación presupuestaria 12-03-60007
Gastos por 459.665 pesetas en concepto de ejemplares de calendarios de ferias y mercados de Extremadura.

f) Proyecto: "Contratación Catalogadora"
Clave de Comunidad nº 1966
Aplicación presupuestaria 13.03.60002

Gastos por 3.012.242 pesetas que corresponden a nóminas y seguridad social.

g) Proyectos: "Contratación de estudios"
Clave de Comunidad núms. 3115 y 3116
Aplicación Presupuestaria 12.05.60011

Gastos por 18.000.000 de pesetas por dos estudios realizados por SODEDAG, S.A. relativos al sector vitivinícola y origen del cerdo ibérico en Extremadura.

h) Proyecto: "Gran Enciclopedia Extremeña"
Clave de Comunidad nº 2350
Aplicación Presupuestaria 13.03.60001

3.789.500 pesetas pagadas a "Ediciones Extremeñas, S.A." por 500 unidades del Tomo III de la Gran Enciclopedia Extremeña.

La documentación examinada pone de manifiesto que, con cargo al FCI, se financia la adquisición de bienes fungibles y servicios que no pueden considerarse inventariables, ni están dentro de los fines previstos por la Ley del Fondo.

V.- CONCLUSIONES

- La Comunidad no suministra información contable analítica en los términos que dispone el artículo 9.3 de la vigente Ley del Fondo, por lo que se reitera la obligatoriedad de adoptar las medidas oportunas para la aplicación del sistema contable prescrito en la Ley, a los efectos de posibilitar el control de la ejecución de todos los proyectos vinculados al FCI.
La documentación correspondiente a las modificaciones introducidas en los proyectos, no suministra información que justifique dichas modificaciones, por lo que se recomienda que se elabore y aporte una memoria que permita determinar la motivación de las mismas (Epígrafe II.C).

- Se ha incorporado la totalidad de los remanentes de crédito vinculados a FCI de ejercicios anteriores, incluso los 568 millones de pesetas que fueron anulados en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 1989.

- A 31 de diciembre de 1990 el grado de ejecución del FCI, es del 64%. No obstante, existen proyectos que han tenido una ejecución poco significativa. (Epígrafe III.3.B).

- La Comunidad fracciona los proyectos acordados sin que se aporte información que permita contrastarlos con los relacionados en los Presupuestos Generales del Estado, lo que dificulta el seguimiento de dichos proyectos. [5]

- La contabilización efectuada por la Comunidad, relativa a algunos gastos de inversión, no resulta coherente con la naturaleza y concepto de las transacciones que los justifican, financiándose con cargo al FCI gastos corrientes, lo que es contrario a la finalidad que la Ley 29/1990 otorga al destino de los recursos del Fondo (Epígrafe IV).

Madrid, 21 de diciembre de 1993
PRESIDENTE,

Fdo: Adolfo Carretero Pérez

[4] La documentación aportada en relación con la alegación 4ª no permite establecer relación entre los proyectos aprobados y los correspondientes fraccionados, ya que estos últimos no constan.

[5] En relación con la alegación formulada (4ª) se indica:
- Los 5 primeros proyectos, a) a e), fueron facilitados en 1992 por la Comunidad como integrantes del FCI.
- En los tres restantes proyectos no se aporta documentación que justifique que los gastos puedan ser considerados como inversiones.

[6] Sobre la alegada transparencia de la documentación aportada, véase Nota al primer párrafo al apartado IV

ANEXO I

1990

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

DOTACION DE PROYECTOS.- FCI/90

(en millones de ptas.)

PG

PROYECTO Nº	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
2	Defensa sanitaria producc. animal	8	—	8
3	Defensa sanitaria dehesa arbolada	9	—	9
4	Defensa sanitaria superficie forestal	12	—	12
5	Infraestructura rural	369	—	369
6	Construcción y dotación laboratorio	3	—	3
7	Centro de atención primaria.Badajoz	100	—	100
8	Centro de atención primaria.Cáceres	114	—	114
10	Promoción pdtos extremeños.Cerdo iberico	30	(30)	—
11	Equipo de mercados ganaderos	40	—	40
12	Lonja de contratación de origen	8	—	8
13	Equipo laboratorios control de calidad	24	—	24
16	Equipamiento laboratorio de residuos	23	—	23
17	Departamento tecnología agroalimentaria	60	—	60
18	Unidad didactica de caprino	10	—	10
20	Instalación centro reuniones	50	—	50
21	Ordenación y mejora pastos.Badajoz	23	—	23
22	Ordenación y mejora pastos.Cáceres	52	—	52
23	Repoblaciones forestales.Badajoz	28	—	28
24	Repoblaciones forestales.Cáceres	53	—	53
25	Plantas y equipos de prepr. astillas	8	—	8
26	Restauración hidrológico forestal	5	—	5
27	Tratamiento de la producción forestal	91	—	91
28	Actuaciones mejoras en dehesas boyales	284	—	284
30	Creación y mejora infraestructura	562	—	562
31	Contratación de estudios	13	—	13
32	Industrias y ordenación agroalimentaria	202	—	202
33	Obras de ordenación nucleos rurales	8	—	8
34	Tratamiento, mejora e intesf. regadios	509	—	509
35	Naves industriales	40	—	40
36	Investigacion de arcillas y pizarras	25	—	25
37	Investigación e inventario aguas termales	20	—	20
38	Laboratorio	6	—	6
39	Adquisición y rehabilitación red de teatro	100	—	100
40	Creación bibliotecas municipales	80	—	80
41	Contrucción y equip. casas cultura	70	—	70
53	Red de instalaciones deportivas	198	—	198
55	Area aparcamiento camiones.Plasencia	50	—	50
56	Estación autobuses.Almendralejo	35	—	35
60	Incidencias, revisiones, modificados, etc.	50	296	346
61	Incidencias, revisiones, modificad., etc.,	50	—	50
68	Ampliación BA-70 y CC-700, p.k. 0-21,850	85	—	85
69	Ampliación C-501 Alcorcon-Plasencia	163	(1)	162
70	Nueva carretera C-511 Navalmoral-Portugal	128	—	128
71	Ampliación y mejora C-420	120	—	120
72	Ampliación y mejora CC-713	537	(15)	522
73	Ampliación mejora C-520 N-V/Villanueva	324	(5)	319
74	Complementario Pte. Autonomía	360	—	360
75	Amp. mejora C-401 N-V/Miajadas	602	—	602
76	Ampliación mejora C-524 Trujillo-Zorita	250	—	250
77	Ampliación mejora C-512	300	—	300
78	Ampliación mejora C-530 Val.Alcantara-Beda	430	—	430
79	Ampliación C-4311 Zafra-Jerez de los Cab.	250	—	250
80	Desdoblamiento calzada C-436 Badajoz-Olive	84	—	84
81	Ampliación C-413 Garbayuela-Puebla Alcocer	100	—	100
82	Complementario CC-713 Navalmoral-Guadalupe	360	(41)	319
83	Mejora puente ruecas y travesia Madrigalej	70	—	70
84	Complementario N-435 Zafra-Fregenal	400	—	400
85	Presa abastecimiento agua	70	—	70
86	Planta depuradora. Novelda Sagrajas	33	—	33
87	Nueva conducción agua.Casas de don Pedro	21	—	21

PG

Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
88	Saneamiento integral.Montijo	146	(57)	89
89	Encauzamiento Guadiana. Merida	55	—	55
90	Depuradora aguas residuales	550	(6)	544
91	Encauzamiento arroyo.Villafranca de los ba	175	(44)	131
92	Depuración integral.Valle del Jerte	373	(142)	231
93	Abastecimiento mancomunidad.Nogales	100	—	100
94	Abastecimiento mancomunidad.Los Molinos	150	—	150
95	Abastecimiento Medina Torres y Puebla S.	75	—	75
96	Construcción albergue	200	—	200
97	C.O. minusvalidos Moraleja	238	(59)	179
98	R.C. Ancianos Jerez de los Caballeros	60	—	60
99	G.I. Olivenza	15	—	15
100	Centro social de Cáceres	28	—	28
101	R.C. Ancianos Azuaga	110	(27)	83
102	R.C. Ancianos Merida	35	(10)	25
103	Centro Social de Plasencia	101	—	101
104	Reformas y liquidaciones	61	96	157
105	Promoción productos extremeños	—	30	30
106	Encauzamiento arroyo Nava Santiago	—	15	15
	TOTAL	10.581	—	10.581

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO PROYECTOS FCI/90
(en millones de pesetas)

ANEXO II
1.990

CONSEJERIAS	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCION
PRESIDENCIA Y TRABAJO	300	14	5
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO	4.235	3.019	71
EDUCACION Y CULTURA	750	201	27
SANIDAD Y CONSUMO	363	147	40
TURISMO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	493	8	2
OBRAS PUBLICAS, URBAN. Y MEDIO AMB.	7.205	5.557	77
EMIGRACION Y ACCION SOCIAL	648	90	14
	—	—	—
T O T A L E S	13.994	9.036	65

ANEXO III
1.990

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
CLASIFICACION POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 1990
(en millones de pesetas)

AÑOS FCI	OBRAS PUBLICAS	AGRIC. PESCA Y GANADERIA	VIVIENDA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	SANIDAD	EDUCACION	OTRAS OBRAS DE INFRAESTR.	TOTALES
1990	5.458	3.019	100	8	147	201	103	9.036
1989	2.299	774	--	34	64	235	139	3.545
1988	102	364	93	60	11	44	72	746
1987	16	132	159	3	17	28	21	376
RESTO FCIS	145	7	94	--	2	3	78	329
T O T A L	8.020	4.296	446	105	241	511	413	14.032

MURCIA

INFORME SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

LA REGION DE MURCIA

EJERCICIO 1990

INDICE

I.- INTRODUCCION

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI
III.1.- CREDITOS GESTIONADOS
A) CREDITOS INICIALES
B) CREDITOS INCORPORADOS

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

V.- CONCLUSIONES

ANEXOS

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, y en el artículo 9 de la Ley 29/1990, del Fondo de Compensación Interterritorial, ha efectuado la fiscalización de los proyectos financiados con cargo al citado Fondo Y gestionados por la Comunidad Autónoma de Murcia en el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los trabajos y procedimientos realizados dentro de los planes generales de fiscalización de este Tribunal.

I.- INTRODUCCION

La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial -en adelante FCI- es la norma fundamental que regula este instrumento financiero de las Comunidades Autónomas, ya que en ella se recogen y articulan los principios constitucionales y disposiciones básicas que se contemplan en el artículo 158 de la Constitución Española, y en el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de dichas Comunidades (LOFCA).

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI, ha sido derogada con efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 29/1990, de 27 de diciembre, que recoge el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, de aplicación durante el ejercicio 1990, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1990 establece que los proyectos de inversión del Fondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecución a su entrada en vigor (28 de diciembre de 1990), se regirán por la Ley 7/1984.

Entre los cambios más significativos que aporta la nueva Ley del FCI, destacan los siguientes:

- La determinación de los territorios beneficiarios del FCI, que serán sólo las Comunidades Autónomas de menor desarrollo económico dentro del Estado.
- El destino de los recursos del FCI, disponiéndose que se apliquen a financiar proyectos que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza.
- La armonización de las necesidades de tesorería de la Hacienda Central con las de las Comunidades Autónomas.

Estas reformas, además de adecuar el FCI a los principios constitucionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios sustentados por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 63/1986 y 183/1988, en las que se declara inconstitucional el artículo 10.2 de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor agilidad a las Comunidades Autónomas para la solicitud y percepción de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990 recoge definitivamente el principio de automaticidad de la incorporación de remanentes de créditos, los cuales quedan afectos a la ejecución del respectivo proyecto de inversión, o del que le sustituya, de conformidad con el artículo 16.5 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Artículo 7.5).

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 21 de febrero de 1990, establece una "Compensación Transitoria" para los ejercicios 1990 y 1991, en tanto no se revise el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, con el caracter de financiación incondicionada.

II.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verificar la regularidad contable de los créditos del FCI gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, comprobando su imputación al periodo y conceptos que les corresponden.

2.- Verificar la regularidad legal de las actuaciones realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta a:

- Naturaleza de los gastos realizados.
- Adecuación de las modificaciones realizadas a la normativa aplicable.
- Aplicación de la contabilidad analítica a los proyectos del FCI, de conformidad con su Ley reguladora.
- Adecuación de los gastos realizados a la finalidad señalada por la Ley del Fondo.

3.- Determinación de la ejecución de los proyectos financiados con el FCI.

B) ALCANCE

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las dotaciones del FCI para 1990. La fiscalización se ha realizado de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican a continuación.

C) LIMITACIONES

1.- La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabilidad analítica que establece el 9.3. de la Ley 29/1990, por lo que no es posible determinar objetivamente los costes imputables a cada proyecto, ni las unidades físicas de realización mas significativas.

2.- La Comunidad no ha aportado documentación que justifique los motivos por los que ha sustituido, o modificado, los proyectos de inversión relacionados en los Presupuestos Generales del Estado (artículo 6.4 de la Ley 29/1990 del FCI), lo que limita el conocimiento de las causas que motivan las modificaciones introducidas.

III.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI

III.1.- CREDITOS GESTIONADOS

A) Créditos iniciales

Los créditos que figuran asignados a la Comunidad en la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado ascienden a 5.179 millones de pesetas, de los cuales 4.680 millones corresponden a la financiación de los proyectos acordados y 499 millones a la Compensación Transitoria.

El incremento que supone el crédito inicial del FCI de 1990 para esta Comunidad, excluida la citada Compensación Transitoria, respecto al ejercicio 1989, representa un 24%.

B) Créditos incorporados

Sin perjuicio de la limitación que recogió este Tribunal en su Informe de 1989, relativo a la falta de datos correspondientes a la gestión del FCI por parte de esta Comunidad en el citado ejercicio, a 31 de diciembre de 1989 no figuran registrados remanentes de crédito de FCI, por lo que el crédito disponible es de 4.680 millones de pesetas correspondiente a la dotación íntegra del Fondo para 1990.

III.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

El Anexo I presenta la relación de los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990.

Durante el ejercicio 1990 han tenido lugar modificaciones que han afectado a los proyectos de inversión acordados, que se recogen también en el anexo citado, siendo el resumen de las situaciones que presenta el siguiente:

SITUACION	Nº	Dotación (mill. Ptas.)
Proyectos que no varían	8	963
Proyectos sustituidos	-	--
Proyectos nuevos	-	--
Proyectos modificados	11	3.717
TOTAL	19	4.680

III.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

A) Grado de Ejecución

El grado de ejecución correspondiente a los proyectos de inversión financiados con cargo al FCI de 1990 se presenta en el anexo II.

El análisis de dicho anexo pone de manifiesto que esta Comunidad ha ejecutado al 100% los 19 proyectos previstos para 1990.

Los pagos correspondientes a dichos proyectos ascienden a 4.013 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 86%.

B) Distribución Sectorial de las Inversiones

En el Anexo III se muestra el importe total a que ascienden las obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio, clasificadas por aquellos sectores de inversión más relevantes entre los citados en el artículo 16.2 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), con especial significación del sector de Obras Públicas, que concentra el 66% del total de obligaciones reconocidas.

III.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

En el ejercicio 1990 esta Comunidad ha reconocido derechos por importe de 4.680 millones de pesetas, correspondientes a la dotación total del FCI para dicho año, que quedan en su integridad pendientes de cobro al cierre del ejercicio, dado que las peticiones de fondos efectuadas por la Comunidad (6 en total) se realizan entre los meses de diciembre de 1990 y julio de 1991.

Respecto a la Compensación Transitoria, de los 499 millones de pesetas consignados para esta Comunidad en los Presupuestos Generales del Estado para 1990, ha ingresado la totalidad.

En Presupuestos Cerrados, la Comunidad ha registrado cobros por 4.304 millones de pesetas, de los 5.054 millones que tenía pendientes a 1 de enero de 1990, por lo que restan 750 millones de pesetas.

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Los proyectos genéricos, denominados por la Comunidad Superproyectos o Proyectos-Estado, son desglosados posteriormente en proyectos más concretos que, en algunos casos, suponen más de cuarenta proyectos fraccionados, sin que exista en todos los casos información individualizada de cada uno de dichos proyectos que permita, a través de la contabilidad, efectuar un control y seguimiento de los mismos.

El examen de la documentación de algunos proyectos presenta las particularidades siguientes:

a) Proyecto nº 08: Estaciones Depuradoras
   - Proyecto fraccionado Nº 90/2350/10
   - "Reparaciones inundaciones Septiembre 1989"

   Se observa la existencia de documentación contable que justifica el pago de 22 millones de pesetas por reparaciones en el colector de Cieza y la estación depuradora de Lorqui-Centi, lo que pone de manifiesto que se financian con FCI "reparaciones" no proyectos de inversión, hecho que no contempla la Ley del Fondo.

b) Proyecto nº 05: Promoción de Viviendas
   - Proyecto fraccionado: 90/503/09
   - "Reparación 40 viviendas en Abanillas"

   El importe de dicho proyecto asciende a 19 millones de pesetas, destinados a "reparaciones" en viviendas según se pone de manifiesto, tanto en la memoria del proyecto, como en los documentos contables examinados, por lo que el destino dado a los fondos no corresponde tampoco a lo previsto en la Ley del FCI.

V.- CONCLUSIONES

- La Comunidad no suministra información contable analítica en los términos que dispone el artículo 9.3 de la vigente Ley del Fondo, por lo que se reitera la obligatoriedad de adoptar las medidas oportunas para la aplicación del sistema contable prescrito en la Ley, a los efectos de posibilitar el control de la ejecución de todos los proyectos vinculados al FCI.
  La documentación correspondiente a las modificaciones introducidas en los proyectos, no suministra información que justifique dichas modificaciones, por lo que se recomienda que se elabore y aporte una memoria que permita determinar la motivación de las mismas (Epígrafe II.C).

- La contabilización efectuada por la Comunidad, relativa a algunos gastos de inversión, no resulta coherente con la naturaleza y concepto de las transacciones que los justifican, financiándose con cargo al FCI gastos de conservación y mantenimiento (reparaciones), lo que es contrario a la finalidad que la Ley 29/1990 otorga al destino de los recursos del Fondo (Epígrafe IV).

- La Comunidad fracciona alguno de los proyectos inicialmente acordados, no suministrando información, en todos los casos examinados, que permita enlazar los proyectos fraccionados con los relacionados en los Presupuestos Generales del Estado, dificultándose con ello su control y seguimiento, por lo que se recomienda que se tomen las medidas oportunas para la subsanación de estas deficiencias (Epígrafe IV).

Madrid, 21 de diciembre de 1993
PRESIDENTE,

Fdo: Adolfo Carretero Pérez

COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

ANEXO I
1990

DOTACION DE PROYECTOS.-FCI 90

(en millones de pesetas)

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO FINAL
1	Cartografía	60	—	60
2	Variante carreteras	315	(69)	246
3	Ensanche y mejora carreteras	1 509	(214)	1 295
4	Obras mejoras en puertos	116	—	116
5	Promoción viviendas	460	138	598
6	Terminales transporte	65	—	65
7	Sondeos y depurac.aguas	200	(75)	125
8	Estaciones depuradoras	691	560	1 251
9	Centro actividades nauticas	122	—	122
10	Creación centros artesania	30	—	30
11	Mercados municipales	25	—	25
12	Centro nuevas tecnologias	80	(64)	16
13	Inspección Técnica de vehiculos	45	—	45
14	Laboratorio homologación	20	(4)	16
15	Moderniz.regadios tradicionales	500	—	500
16	Constrc.caminos rurales	320	(181)	139
17	Concentración parcelaria	45	(36)	9
18	Equipamiento nucleos rurales	50	(37)	13
19	Construc.centros desarrollo	27	(18)	9
TOTAL		4.680	—	4.680

COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

ANEXO-II
1990

EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.- PROYECTOS FCI/90

(en millones de pesetas)

L.P.G. Nº	PROYECTO DENOMINACION	CREDITO FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO DE EJECUCION	PAGADO
01	Cartografía	60	60	100	54
02	Variante carreteras	246	246	100	163
03	Ensanche y mejora carreteras	1 295	1 295	100	1.295
04	Obras mejoras en puertos	116	116	100	116
05	Promoción viviendas	598	598	100	598
06	Terminales transporte	65	65	100	29
07	Sondeos y depurac aguas	125	125	100	125
08	Estaciones depuradoras	1 251	1 251	100	962
09	Centro actividades nauticas	122	122	100	1
10	Creación centros artesania	30	30	100	13
11	Mercados municipales	25	25	100	22
12	Centro nuevas tecnologias	16	16	100	5
13	Inspección Técnica de vehiculos	45	45	100	26
14	Laboratorio homologación	16	16	100	2
15	Moderniz.regadios tradicionales	500	500	100	436
16	Constrc.caminos rurales	139	139	100	139
17	Concentración parcelaria	9	9	100	9
18	Equipamiento nucleos rurales	13	13	100	13
19	Construc.centros desarrollo	9	9	100	5
TOTAL		4.680	4.680	100	4.013

COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

ANEXO-III
1990

CLASIFICACION POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO 1.990

(en millones de pesetas)

	Obras Públicas	Agricultura, Pesca y Ganaderia	Vivienda	Transportes y Comunicaciones	Sanidad	Educación	Otras obras nfraestructur	Totales
FCI. 1990	3.094	661	598	65	9	121	132	4.680

INFORMES SOBRE EL FONDO DE COMPESACION INTERTERRITORIAL (ejercicio 1990) DE LAS CC. AA. DE ANDALUCIA, CANARIAS, GALICIA Y VALENCIA

ANDALUCIA

INFORMES SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL POR OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 1990

INDICE

SIGLAS

I. INTRODUCCION

I.1 Bases Legales de Actuación
I.2 Fundamentos de la reforma de la regulación del FCI, por Ley 29/90, de 26 de diciembre
I.3 Aspectos significativos de la nueva regulación

II. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGIA

III. OPINION

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV.1. Modificaciones Presupuestarias
IV.2. Contratación Administrativa
IV.3. Financiación de Proyectos del FCI

V. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME SOBRE EL FCI/89

VI. LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

VII. EJECUCION DE PROYECTOS

VII.1. Análisis de la ejecución
VII.2. Análisis de Modificaciones Presupuestarias
VII.3. Análisis de la Contratación Administrativa

VIII. FINANCIACION DE PROYECTOS

VIII.1. Derechos Reconocidos
VIII.2. Derechos Anulados
VIII.3. Percepción de Ingresos del Fondo
VIII.4. Evaluación del Control Interno

IX. ANEXOS

Anexo I.1. Liquidación presupuestaria de los recursos afectados a los distintos FCIs por operaciones realizadas en 1990.

Anexo I.2. Liquidación presupuestaria de los créditos afectados a los distintos FCIs por operaciones realizadas en 1990.

Anexos II.1. al II.8. Relación de proyectos financiados con FCI/90.

Anexo III.1. Ejecución del FCI por secciones, por operaciones realizadas en 1990. Actuales y Remanentes.

Anexo III.2. Estado comparativo por secciones del FCI/90.

Anexo IV. Clasificación por sectores de las Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio 1990.

Anexo V. Flujo de cobros y pagos en el ejercicio 1990.

Anexo VI. Estado de resultas del FCI de ejercicios anteriores (Derechos a Cobrar).

Anexo VII. Estado de resultas del FCI de ejercicios anteriores (Obligaciones a Pagar).

Anexo VIII. Clasificación por sectores de las resultas de ejercicios anteriores.

X. GRAFICOS

XI. ALEGACIONES NO ACEPTADAS DEL GOBIERNO

XII. REPLICA A LAS ALEGACIONES NO ACEPTADAS

SIGLAS

FCI	Fondo de Compensación Interterritorial
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
IARA	Instituto Andaluz de Reforma Agraria
IGJA	Intervención General de la Junta de Andalucía
LCE	Ley de Contratos del Estado
LOFCA	Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
LGHP	Ley General de la Hacienda Pública
M.P.	Millones de Pesetas
PCAG	Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
RCE	Reglamento General de Contratación del Estado
RD	Real Decreto

I. INTRODUCCION

I.1 Bases legales de actuación

El presente Informe correspondiente al FCI por las operaciones realizadas durante el ejercicio presupuestario 1990, responde al mandato recogido en la Ley 29/1990, de 26 diciembre del FCI, art. 9.2. La fiscalización del FCI por esta Cámara de Cuentas, constituye el mecanismo de control parlamentario que se establece para dar cumplimiento al apartado 4 del art. 16 de la LOFCA en el que se concreta que "cada territorio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de los recursos recibidos con cargo al FCI, así como del estado de realización de los proyectos que con cargo al mismo estén en curso de ejecución".

I.2 Fundamentos de la reforma de la regulación del FCI, por Ley 29/90, de 26 de diciembre

La disposición final de la Ley 29/1990 señala que la misma surtirá efecto a partir del 1 de enero de 1990.

La derogada Ley 7/84, de 31 de marzo, del FCI cumplió la previsión de la LOFCA, precisando cada uno de los aspectos esenciales del Fondo y desarrollando un conjunto de preceptos para concretar su funcionamiento e instrumentación, tanto en el ámbito financiero, como en el presupuestario.

Como así se señala en el preámbulo de la Ley 29/90 han existido tres motivos significativos que han demandado la reforma de la regulación del FCI:

- La doble finalidad que en la práctica venía cubriendo el Fondo cual era, no solo la esencial de contribuir a la solidaridad interregional, sino también la de constituir un instrumento de financiación del coste de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas.

- La desviación relativa de sus recursos hacia los territorios más desarrollados, como consecuencia de la definición y ponderación de algunas de las variables de distribución de este mecanismo financiero.

- El cumplimiento del plazo establecido por la LOFCA para la revisión de las ponderaciones: cinco años desde su fijación.

Además de los tres motivos expuestos, debe añadirse la conveniencia de que el Estado adoptase, tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea, una política regional coherente y armónica con la comunitaria. Ello exige la puesta en práctica de criterios de selectividad en las acciones de desarrollo regional, de tal modo que los dos mecanismos financieros, FCI y FEDER, se complementen y potencien respectivamente, por cuanto que ambos responden a idénticos objetivos.

I.3. Aspectos significativos de la nueva regulación

La reforma más profunda introducida por la Ley del FCI es la relativa a la elección de las Comunidades Autónomas perceptoras de los recursos que son las de menor desarrollo económico dentro del Estado, entre las cuales se encuentra Andalucía. Respecto a ello, conviene señalar que estas Comunidades Autónomas están consideradas asimismo, como "objetivo 1" por la Comunidad Económica Europea.

El segundo aspecto destacable de la reforma es el relativo a la definición de las variables de reparto y su ponderación. Se adoptan siete variables de distribución entre las que se encuentran aquellas establecidas como obligatorias en el art. 16 de la LOFCA. En cuanto a la ponderación de las mismas, es de destacar el mayor peso relativo otorgado a la variable de población cifrado en un 87,5% del importe total del FCI. Parece pues quedar garantizado el principio de solidaridad con la exclusión de los territorios con mayor renta y por la utilización entre los restantes, de criterios redistributivos (renta relativa, paro, saldo migratorio, dispersión de la población e insularidad y superficie de cada territorio).

Introduce también la Ley cambios significativos sobre el destino de los recursos del Fondo. A partir del 1 de enero de 1990, el Fondo podrá financiar tanto inversiones reales como transferencias de capital. En este sentido el art. 6 de la Ley 29/90 señala que "el destino del Fondo serán proyectos de inversión que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario".

Como último aspecto significativo de la reforma, la Ley 29/90 modifica el procedimiento seguido para la administración y percepción de los recursos del Fondo. Entre las novedades introducidas se recoge lo ya corroborado por las sentencias 63/86 y 183/88 del Tribunal Constitucional, en el sentido de que para la percepción de los recursos será suficiente con que la Comunidad Autónoma proceda a la petición de los mismos a la Administración Central sin necesidad de justificar su aplicación (En el apartado VIII se trata con mayor detalle el procedimiento que se ha seguido, en la práctica, durante 1990).

II. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGIA

El Informe que se presenta, muestra el resultado de la fiscalización sobre la liquidación del FCI referida al ejecicio 1990, tanto en su vertiente de gastos, por cuanto ésta ofrece información acerca de la ejecución de los proyectos de inversión, como en la vertiente de ingresos, por cuanto muestra la percepción de los correspondientes recursos financieros.

Los objetivos perseguidos son los que se citan:

- Evaluar si la Liquidación Presupuestaria del Fondo, tanto en su vertiente de ingresos como en la de gastos, refleja la realidad económico-financiera al cierre del ejercicio presupuestario 1990.

- Evaluar el cumplimiento de los plazos legales, que para las distintas actuaciones del procedimiento de contratación administrativa establecen la LCE y el RCE.

- Evaluar los mecanismos desarrollados por la Administración Autonómica para garantizar el control y coordinación con la Administración Central para el cobro de los recursos procedentes del FCI.

- Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por esta Institución en el Informe anterior.

Para dar cumplimiento a los objetivos reseñados, el alcance de la fiscalización ha comprendido:

- El examen de la contratación administrativa en las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Educación y Ciencia y en el Organismo Autónomo IARA, por representar en su conjunto un 89% de la dotación del Fondo para el ejercicio 1990, teniendo asignados la ejecución del 69% del número total de proyectos que en el Anexo de inversiones de la Comunidad Autónoma figuran como financiados con el FCI (anexo III.2).

- El examen del control y cobro de los recursos provenientes del FCI.

- El examen de las modificaciones presupuestarias que afectan a proyectos de inversión financiados con el FCI.

En cuanto a la metodología, el trabajo se ha realizado de acuerdo con los principios y normas de auditoría de los Organos de Control Externo, aplicando cuantas pruebas, revisiones y comprobaciones, se han considerado necesarias para sustentar la opinión y conclusiones contenidas en el presente Informe.

En aras a conseguir una mayor operatividad y eficacia, la fiscalización se ha llevado a cabo "in situ", en las dependencias de la IGJA y en las Consejerías y Organismo Autónomo a los que se hizo anteriormente referencia.

No obstante, el examen de los expedientes de modificación presupuestaria relativos al Fondo han sido analizados, a partir de su remisión, en las dependencias de esta Institución.

La lectura de este Informe requiere que se tenga en cuenta el contexto global del mismo. Cualquier abstración hecha sobre un apartado o párrafo pudiera no tener sentido aisladamente considerado.

III. OPINION

La Liquidación Presupuestaria del FCI de la Comunidad Autónoma de Andalucía, referida al ejercicio 1990, con la salvedad sobre el descuadre entre los importes contabilizados como cobrados por la Administración Autonómica y los pagados por la Administración Central, cifrados en 4.329 MP (apartado VIII.3), refleja la realidad económico-financiera al cierre del citado ejercicio; no obstante, la Administración Autonómica no ha desarrollado, con el rigor suficiente, los procedimientos de seguimiento y supervisión adecuados para garantizar el control y reflejo contable de los recursos que, con cargo al Fondo, se perciben de la Administración Central.

Los órganos de contratación examinados, a los que se hace referencia en el apartado II, no cumplen, en general, con los plazos que para las distintas fases del procedimiento de contratación administrativa establecen la LCE y el RCE.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV.1. Modificaciones Presupuestarias

(1) El 37% de las incorporaciones de créditos al ejercicio 1990, corresponden a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Las mismas se materializan en 125 proyectos, de los cuales 84 proceden de años anteriores a 1988. Al cierre del ejercicio 1990 tan sólo 14 han finalizado su ejecución, mientras que los 111 restantes son incorporados al ejercicio 1991 (apartado VII.2.1).

Se recomienda a los órganos gestores de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que ejerzan un mayor control sobre la ejecución de los proyectos a ellos encomendados, especialmente cuando estos proceden de años anteriores a 1988, analizándose y tratando de buscar soluciones a las causas que motivan tan dilatada ejecución en el tiempo.

(2) Durante el ejercicio 1990 se producen anulaciones de créditos por importe de 66 M. P. (apartado VII.2.1).

Se mantiene la recomendación formulada en el Informe sobre el FCI/89, en el sentido de utilizar los mecanismos de que dispone la Administración, como la sustitución de proyectos, evitándose así la anulación de crédito. Téngase en cuenta que al ser la financiación del Fondo condicionada, los recursos no se percibirán si los proyectos de inversión se anulan y, por tanto, no se ejecutan.

(3) La causa justificada para poder incorporar automáticamente los créditos que amparan compromisos de gastos contraídos antes del último mes del ejercicio presupuestario exigida a tenor del art. 40.2.b) de la LGHP, no consta en los expedientes de incorporación de créditos examinados (apartado VII.2.1).

Se mantiene la recomendación formulada en el Informe sobre el FCI/89, instando a los órganos gestores de la Junta de Andalucía y de los Organismos Autónomos a la inclusión, de dicha justificación, en el expediente de incorporación.

(4) En los expedientes de transferencias cualitativas no queda constancia de que los mismos hayan sido informados por el Comité de Inversiones Públicas del Estado, trámite preceptivo a tenor del art. 6, puntos 2 y 4 de la Ley 29/90 del FCI y del art. 5 del Decreto 248/1988, por el que se estructura y regula el Comité de Inversiones Públicas de Andalucía (apartado VII.2.2).

Se insta al Comité de Inversiones Públicas de Andalucía, con el objeto de dar cumplimiento a los preceptos citados, a poner en conocimiento del Comité de Inversiones Estatal, las modificaciones cualitativas en trámite, con el fin de que el mismo proceda a informarlas sin perjuicio de su posterior aprobación por el órgano competente.

(5) El 28% de los expedientes de modificación de proyectos no suponen transferencias de créditos, por cuanto las mismas tienen lugar a nivel inferior al concepto presupuestario (apartado VII.2.2).

Se mantiene la recomendación formulada en el Informe sobre el FCI/89, instando a la IGJA, a la creación de un nuevo documento contable que plasme este tipo de modificaciones de proyectos, reservándose el documento T para las transferencias de créditos.

IV.2. Contratación Administrativa

(6) Inexistencia de una mínima correlación entre el programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo preceptuado en el art. 22. b) de la LCE y las anualidades asignadas a cada proyecto de inversión (apartado VII.3.1).

Se recomienda se tengan en consideración los programas de tiempo y coste en el momento de la distribución de las anualidades presupuestarias, de forma que, al menos en principio y de modo aproximado, éstas se adapten a las posibilidades de ejecución y no aumenten innecesariamente los remanentes incorporados al ejercicio siguiente.

(7) Respecto al momento en que la adjudicación ha de estar ultimada, en los expedientes analizados, ésta ha tenido lugar en los últimos meses del ejercicio 1990, e incluso en los primeros de 1991 (apartado VII.3.1) y no se acredita en los expedientes ninguno de los supuestos excepcionales que art. 20 de la LCE contempla.

Se mantiene la recomendación formulada en el Informe sobre el FCI/89, esto es, agilizar la realización de las actuaciones preparatorias de los expedientes de contratación para su adjudicación dentro del primer semestre de cada año, como así preceptúa el art. 20 de la LCE. A tal efecto, igualmente se recomienda la utilización de la vía de la tramitación anticipada de expedientes de gastos regulada en el Decreto 196/1987, de 26 de agosto, y en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 27 de noviembre de 1987.

(8) Los retrasos constatados en la adjudicación de los contratos han dado lugar a que el inicio de la ejecución, en alguno de los casos examinados, no tenga lugar hasta el ejercicio 1991, produciéndose incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria en el que el art. 41 de la LGHP se inspira y no practicándose el reajuste de anualidades que de dicha situación se derivaría (apartado VII.3.1).

Se recomienda proceder a reajustar las anualidades con el fin de establecer la necesaria correlación entre la contracción de los créditos del estado de gastos y las obligaciones a que hayan de quedar afectadas.

(9) En el apartado VII.3.2 se ponen de manifiesto las diversas causas que motivan una baja ejecución durante el ejercicio 1990; dicha situación tiene como consecuencia el que la ejecución real del ejercicio no se acomode a la anualidad dotada para el mismo, sin que se haya apreciado la instrumentación de los trámites preceptuados en el art. 152 del RCE.

En este sentido se recomienda a los órganos gestores de la Administración Autonómica un mayor seguimiento en las ejecuciones de las obras, así como a poner en práctica las facultades que el art. 137 del RCE les confiere sobre la resolución del contrato con pérdida de fianza, o la imposición de las penalidades establecidas en el art. 138 del RCE, cuando por causas imputables al contratista se incurre en demora en los plazos parciales de ejecución sucesiva del contrato.

Por otro lado, y con objeto de conseguir la acomodación de la ejecución real a la anualidad dotada para el ejercicio, se recomienda igualmente el correspondiente reajuste de anualidades.

(10) En las certificaciones de obra expedidas sin acreditar ejecución, no se justifican las causas que motivan dicha circunstancia (apartado VII.3.2).

Se insta al cumplimiento de lo preceptuado en la Orden de 5 de diciembre de 1984, del Ministerio de Economía y Hacienda, que en su art. 5 señala la obligatoriedad de aclarar las razones que motivan la certificación sin unidades de obra ejecutada.

(11) Los retrasos constatados en el pago de las certificaciones de obra hacen que exista el riesgo de exigencia, por parte del contratista del interés de demora, e incluso la posible suspensión temporal de las obras, con lo que ello supondría para el coste total de la obra y el plazo de ejecución de la misma (apartado VII.3.2).

Se insta al puntual cumplimiento de las obligaciones de pago, aún cuando se es consciente del retraso en el cobro de los recursos del FCI. Igualmente, se recomienda se aceleren los trámites de solicitud de Fondos a la Administración Central, de tal manera que se equilibre la corriente de cobros-pagos y se reduzcan así, los riesgos antes mencionados.

(12) Respecto a la liquidación provisional de obra, se constata incumplimiento de los plazos legales tanto en el levantamiento del acta de recepción, como en la elaboración del proyecto de liquidación y pago de la correspondiente certificación (apartado VII.3.3).

Se insta a los órganos gestores de la Junta de Andalucía al cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.

(13) En el apartado VII.3.4, se ponen de manifiesto las causas que motivaron los reformados al contrato primitivo apreciándose con cierta frecuencia la incorrección o la falta de previsión existente a la hora de la redacción del proyecto.

En este sentido, se mantiene la recomendación formulada en el Informe sobre el FCI/89, esto es, prestar la atención y el rigor necesario en el momento de la elaboración de los proyectos de obras, de forma que se ajusten a la realidad técnica y económica, obviándose, de este modo, la necesidad de posteriores modificaciones. A estos efectos se insta a las Oficinas de Supervisión de Proyectos, al correcto desempeño de sus funciones, sometiendo a juicio crítico, los proyectos objeto de su informe preceptivo.

(14) Igualmente, en el citado apartado se ponen de manifiesto los retrasos que sobre la ejecución ocasiona la dilación en el tiempo de los trámites necesarios para la aprobación de los reformados.

Se recomienda agilizar las actuaciones administrativas que conllevan la aprobación de reformados con el objeto de reducir la incidencia de las mismas sobre la ejecución de las obras.

IV.3. Financiación de Proyectos del FCI

(15) En el apartado VIII.3, se pone de manifiesto la tardanza producida en el cobro de los fondos.

Se recomienda, en la medida que la misma se derive de un retraso en la solicitud de los Fondos a la Administración Central, se agilicen dichas peticiones con el objeto de contribuir así al equilibrio entre los cobros y los pagos derivados de la ejecución de los proyectos de inversión y apremie a la Administración Central a la rápida resolución de las peticiones.

(16) Se ponen de manifiesto en el apartado VIII.4, las debilidades del sistema de control sobre el FCI utilizado por la IGJA.

Se insta a la IGJA a que implante un sistema informatizado para el control y seguimiento del FCI, tal y como se indicaba en el Informe sobre el FCI/89. Igualmente se recomienda implante unos adecuados sistemas de supervisión en orden a detectar y subsanar los posibles errores a la hora de certificar los proyectos de inversión, que eviten aquellos fallos que conducen a que la Administración Central rechace certificaciones. De este modo se podrían evitar retrasos en el cobro de los fondos.

Asimismo, se recomienda efectuar anualmente las conciliaciones entre los importes cobrados por la Comunidad Autónoma y los pagados por la Administración Central, en aras a evitar, en los ejercicios futuros, se produzcan los descuadres detectados.

V. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME SOBRE EL FCI/89

Dado que el Informe sobre la fiscalización del FCI/89 se emitió con fecha abril de 1991, el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en dicho Informe no es suceptible de apreciación en el ejercicio 1990.

No obstante, se exponen en relación a éstas, las mejoras introducidas por la Administración Autonómica.

- La Comunidad Autónoma en virtud de lo dispuesto en la Orden de 28 de marzo de 1989 sobre la elaboración del presupuesto de la Comunidad para el ejercicio 1990, ha procedido a la contabilización en servicios presupuestarios independientes, los créditos del FCI y del FEDER. Ello ha facilitado el seguimiento de los créditos del FCI/90, permaneciendo la dificultad para el FCI/89 y FCI/88.

- Se instaba a la IGJA a efectuar la reclasificación de los 1.059 M. P. compensados por la Dirección General del Tesoro, como pagos por deudas de la Comunidad Autónoma en concepto de Seguridad Social. Dicha reclasificación ha tenido lugar, según los documentos justificativos aportados, con fecha octubre de 1991.

- Se ha observado, igualmente, una reducción en el tiempo de permanencia de los importes cobrados en operaciones extrapresupuestarias; esta reducción se cifra en 25 días. Ello facilita un estudio más exacto de la gestión de cobros de la Comunidad Autónoma.

VI. LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

La dotación del FCI correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía que figura en los anexos de la Sección 33 Capítulo 7, de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, asciende a 47.542 M. P. Dicha dotación ha de tener reflejo en el Presupuesto de Ingresos de la Comunidad Autónoma, dentro del Capítulo 7 "Transferencias de Capital de la Administración del Estado"

Durante el ejercicio 1990, la Comunidad Autónoma presupuestó como FCI/90 un importe total de 54.841 M. P., existiendo, por tanto, una diferencia respecto a la consignada por el Estado de 7.299 M. P. Ello es debido a que la Administración Autonómica calculó la dotación a percibir por el FCI/90 cuando aún no se conocía con exactitud la dotación real; téngase en cuenta que mientras que los Presupuestos Autonómicos se aprobaron en febrero de 1990, los Estatales no se aprobaron hasta junio del mismo año. Así pues, cuando la Comunidad Autónoma tuvo conocimiento cierto de la dotación real a percibir, tramitó una modificación presupuestaria por importe de 7.299 M. P., aprobada por el Consejo de Gobierno acordándose en la

misma, reducir la dotación del FCI en dicha cuantía, pasando a financiar los proyectos afectados, con recursos provenientes del concepto de ingresos 702 "Compensación Transitoria".

Respecto a la contabilización de los créditos del FCI/90 en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad, de acuerdo con la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 28 de marzo de 1989, han sido consignados dentro de la clasificación orgánica y económica a nivel de servicio presupuestario (Servicio 19).

Esta forma de proceder que fue objeto de recomendación en el Informe del FCI para el ejercicio 1989 como anteriormente se indicó, facilita el seguimiento de la ejecución de los créditos del FCI. No obstante, los Servicios 89 y 99 (engloban los remanentes incorporados al ejercicio 1990 del FCI/88 y FCI/89) siguen recogiendo créditos del FCI y del FEDER. Se mantiene la dificultad de desglosar la parte del crédito incorporado perteneciente a una u otra fuente, así como la dificultad en la distinción de la afectación de una modificación presupuestaria a una u otra fuente de financiación.

En los anexos I.1 y I.2 se muestra la Liquidación Pesupuestaria del FCI.

VII. EJECUCION DE LOS PROYECTOS

VII.1. Análisis de la ejecución

El criterio seguido por esta Cámara en el Informe sobre el FCI/89, consistió en la distinción de dos niveles de ejecución, de una parte el que hace referencia al porcentaje de los créditos comprometidos sobre los finales asignados a cada proyecto, y de otro el porcentaje que representan las obligaciones ejecutadas de cada proyecto respecto al crédito final asignado a cada uno de ellos.

Si el primer nivel de cuantificación del grado de ejecución, ofrece información sobre el porcentaje de adjudicación del proyecto, el segundo, proporciona información acerca del ritmo de la ejecución real del mismo.

En los anexos II.1 al II.8 se incluye un detalle pormenorizado de los proyectos financiados con FCI/90 y del grado de ejecución en los dos niveles descritos.

En el anexo III.1 se incluye un resumen general por Consejerías y Organismos ejecutores de inversiones del FCI. Así pues, para los proyectos financiados con FCI/90, el porcentaje de obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo asciende a un 75%, mientras que para aquellos proyectos, que financiados con Fondo de ejercicios anteriores se incorporan al ejercicio 1990, tan sólo asciende a un 67%. Respecto a este último conjunto de proyectos y como se pone de manifiesto en el apartado correspondiente a modificaciones de proyectos, un 24% de ellos proceden de ejercicios anteriores a 1987.

Por último, en el anexo IV se incluye un resumen por sectores de las Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio presupuestario 1990; del mismo se deduce que es el sector de Obras Públicas seguido por los de Educación, Vivienda y Agricultura, Pesca y Ganadería, donde se materializan un mayor número de inversiones durante el ejercicio 1990, absorbiendo entre los mencionados sectores un 78% de la inversión financiada con el FCI.

VII.2. Análisis de Modificaciones Presupuestarias

Durante el ejercicio presupuestario 1990 se han producido modificaciones presupuestarias afectas a los proyectos correspondientes al FCI, por un importe de 25.855 M. P. Dichas modificaciones se han instrumentado en 41 expedientes analizados en su totalidad y cuyo desglose por figuras es el que se muestra en Millones de Pesetas.

	IMPORTE	%	Nº EXPTES.
Incorporaciones (I_3)	24.270	94	27
Transferencias Netas (T)	1.585	6	14
TOTAL MODIFICACION.	25.855	100	41

El trabajo desarrollado en el área de modificaciones presupuestarias afectas al FCI, ha ido encaminado en un doble sentido; de un lado, al análisis del cumplimiento legal a seguir en la tramitación de los expedientes y de otro a efectuar una comprobación entre la información contable y la documentación soporte del mismo.

Los aspectos significativos obtenidos del trabajo descrito en el párrafo precedente se exponen por figuras de modificaciones presupuestarias.

VII.2.1 Incorporaciones de créditos

El total consolidado de incorporaciones de créditos al ejercicio 1990 relativas al FCI asciende a 24.270 M. P., el desglose de la misma por Consejerías y Organismos Autónomos gestores del Fondo es, en Millones de Pesetas:

Consejerías/OO.AA.	IMPORTE	%
Gobernación	445	2
Fomento y Trabajo	826	3
Hacienda y Planificación	30	–
Obras Públicas y Transportes	8.908	37
Agricultura y Pesca	401	2
Educación y Ciencia	3.261	13
Cultura	2.229	9
AMA	1.341	6
IARA	3.841	16
SAS	1.764	7
IASS	1.224	5
TOTAL.	24.270	100

Del total incorporado al ejercicio 1990 destacar que el 89% se incorporó como crédito comprometido y el 11% restante, como crédito libre y que, por tanto, no se había iniciado su ejecución durante los ejercicio anteriores.

La cifra total, 24.270 M. P., muestra las incorporaciones reales de los créditos del Fondo de Compensación Interterritorial, puesto que de la misma, se han sustraido 1.624 M. P., que corresponden a incorporaciones de créditos relativos al FEDER, que como se indicaba en el Informe del FCI/89, estaban contabilizados junto con los créditos del Fondo en los servicios 99 y 89.

Por otro lado, haciendo referencia al desglose de las incorporaciones por Consejerías y Organismos Autónomos, anteriormente expuesto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes es la que mayor volumen registra durante el ejercicio 1990, ascendiendo a 8.908 M. P. que representan, respecto del total, un 37%. Se ha efectuado un análisis de la ejecución durante el ejercicio 1990 de dichos créditos incorporados cuyas conclusiones son:

- Al ejercicio 1990 se incorporan 125 proyectos de los cuales 84 procedían de ejercicios anteriores a 1988. Al cierre del ejercicio presupuestario 1990, tan sólo 14 proyectos finalizaron su ejecución, mientras que los 111 restantes quedaron como remanente a incorporar al ejercicio 1991.

- Entrando en el análisis de los 111 proyectos cabe distinguir que 15 de ellos no han iniciado aún su ejecución (10 son financiados con FCI/87, 2 con FCI/86 y 3 con FCI/85 y anteriores) y 49 proyectos no alcanzaron durante el ejercicio ni el 50% de su ejecución.

De la comparación de los Remanentes de créditos a incorporar que quedó a finales de 1989 y los efectivamente incorporados al ejercicio 1990, surge una diferencia de 66 M. P.; importe éste que fue anulado. Dicha anulación se concentra en un 78% en un proyecto del IARA. Si bien estos remanentes anulados se han reducido respecto al ejercicio 1989, conviene hacer mención a los mecanismos de que dispone la Administración, tal como la modificación de proyectos, los cuales permiten utilizar esta fuente financiera sin necesidad de anular la misma.

Por último, respecto a los trámites legales que conllevan la aprobación de los expedientes y la consiguiente incorporación al ejercicio, se entienden cumplimentados en cada uno de ellos, salvo el requisito que señala el artículo 40.2.b) de la LGHP, el cual exige una causa justificada para poder incorporar automáticamente los créditos que amparan compromisos de gastos contraídos antes del último mes del ejercicio presupuestario; dicha justificación no consta en los expedientes analizados.

VII.2.2. Transferencias de créditos

Las transferencias de créditos, que durante el ejercicio 1990 han afectado a proyectos financiados con FCI, han totalizado 12.773 M. P., en cuanto a las positivas y 11.188 M.P. en lo que respecta a las negativas.

Las transferencias netas totalizan pues, 1.585 M.P. y se han instrumentado en 14 expedientes.

El desglose de las mismas por Consejerías y Organismos Autónomos gestores del Fondo en millones de pesetas es la que a continuación se muestra:

Consejerías/OO.AA.	T+	T-	T_{NETAS}
Presidencia	767	-	767
Fomento y Trabajo	330	375	<45>
Obras Públicas y Transportes	2.413	7.458	<5.045>
Agricultura	8.116	-	8.116
Educación y Ciencia	431	1.357	<926>
Cultura	494	547	<53>
AMA	-	313	<313>
IARA	-	755	<755>
SAS	172	333	<161>
IASS	50	50	0
TOTALES.	12.773	11.188	1.585

Dada la naturaleza de la transferencia entre proyectos del FCI, las mismas pueden calificarse como cualitativas o cuantitativas. Así pues, esta Institución sostiene como criterio, que serán transferencias cualitativas, los supuestos de anulaciones de proyectos inicialmente acordados, mientras que serán transferencias cuantitativas los supuestos de traspaso de créditos entre proyectos que inicialmente estaban presupuestados en un determinado importe.

De los 14 expedientes tramitados, 3 son del tipo cualitativo y 11 son de carácter cuantitativo.

La distinción mencionada tiene efectos en cuanto a los requisitos formales a seguir para la aprobación del expediente; requisitos que no se han visto modificados con la entrada en vigor de la nueva Ley del FCI. Así pues, para las transferencias cualitativas se exige como trámite preceptivo, previo a la aprobación (art. 6, puntos 2 y 4 de la Ley 29/90 del FCI, y art. 5 del Decreto 248/1988 por el que se estructura y regula el Comité de Inversiones Públicas de Andalucía), informe del Comité de Inversiones Públicas del Estado, mientras que para las transferencias cuantitativas no es preceptivo dicho informe, sino que bastará ponerlas en su conocimiento, una vez aprobado definitivamente el expediente.

Hechas estas breves consideraciones cabe señalar que, en lo que respecta a los expedientes de transferencias cuantitativas, se encuentran justificadamente tramitadas.

En lo que a transferencias cualitativas se refiere, no queda constancia en los mismos, de que hayan sido informados por el Comité de Inversiones Públicas del Estado. Las causas que motivaron la tramitación de los citados expedientes son la sustitución de proyectos por resoluciones de contratos o no inicio de su ejecución, englobando sus créditos en las aplicaciones presupuestarias relativas a Previsión de Incidencias.

Por último, el 28% de los expedientes tramitados constituyen modificaciones de proyectos que no suponen transferencias de créditos, al producirse las citadas modificaciones a nivel inferior al concepto presupuestario. Dicho aspecto fue puesto de manifiesto en el Informe del FCI/89, no habiéndose creado un documento que plasme este tipo de modificaciones de proyecto, utilizándose el documento T por ser el más acorde, a estos supuestos.

VII.3. Análisis de la Contratación Administrativa

El examen, en este apartado, ha abarcado desde la iniciación del expediente hasta su ejecución, analizándose, por otro lado, los modificados o complementarios al contrato primitivo, así como las Liquidaciones Provisionales por la incidencia de los mismos, sobre el correcto y puntual desarrollo de las obras.

En este sentido han sido objeto de examen los plazos que la LCE y el RCE establece para las siguientes actuaciones:

- Tramitación previa a la ejecución (procedimiento contractual).
- Ejecución de las inversiones.
- Liquidaciones Provisionales.
- Reformado de proyectos de obras y obras complementarias.

De los aspectos puntuales examinados en cada fase se informa en los subapartados siguientes.

El desglose por órganos de contratación del número e importe de las anualidades, a ejecutar en 1990 con cargo al FCI/90 de los expedientes analizados en Millones de Pesetas, se muestra a continuación:

	Contratos de Obra		Contratos Suministro		Liquidaciones Provisionales		Modificados y Obras Complem.		TOTALES	
	Importe	Núm.	Importe	Núm.	Importe	Núm.	Importe	Núm.	Importe	Núm.
C. O. Públicas	6.959	46	50	2	133	11	954	16	8.096	75
C. Educación	455	11	240	13	48	18	86	5	829	47
IARA	579	14	-	-	186	24	35	9	800	47
TOTALES. ..	7.993	71	290	15	367	53	1.075	30	9.725	169

VII.3.1. Procedimiento contractual

Se analiza en este subapartado la observancia de los requisitos y plazos exigidos por la LCE y el RCE, en las actuaciones administrativas que anteceden al inicio de la ejecución del contrato.

Los aspectos más significativos son, respetando el orden cronológico de los sucesivos trámites, los siguientes:

- El art. 22.b) de la LCE preceptúa la necesidad de incluir en los proyectos de obras, de importe superior a 10 M. P., un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo; por otra parte la LGHP en sus arts. 40.1 y 41 establece, la necesidad de adecuar los créditos del estado de gastos, consignados en él presupuesto, a las obligaciones afectas a los mismos. En los expedientes examinados se observa la ausencia de dicha correlación. Este modo de actuar origina un aumento innecesario de los remanentes comprometidos que son objeto de incorporación al ejercicio siguiente.

- Entre el acuerdo de iniciación y la adjudicación definitiva de los expedientes de contratación de obras adjudicados por subasta y concurso transcurren, en

término medio, 3,5 meses en el IARA y 6,5 meses en la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dentro de esta última merece destacar, las Direcciones Generales de Obras Hidráulicas y Arquitectura y Vivienda con casi 9 meses.

- En cuanto al momento en que dicha adjudicación ha de estar ultimada, el art. 20 de la LCE preceptúa que, la misma, habrá de producirse en el curso del primer semestre de cada ejercicio. En la mayoría de expedientes analizados, la adjudicación tiene lugar en los últimos meses del año e incluso, para algunos de ellos, en los primeros meses del ejercicio 1991, no acreditándose en los expedientes, ninguno de los supuestos excepcionales, que contempla el citado precepto.

- El sistema de adjudicación empleado ha sido, salvo raras excepciones, la subasta y el concurso en la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el IARA, mientras que la Consejería de Educación y Ciencia emplea la contratación directa en la totalidad de los expedientes examinados, a pesar del carácter excepcional que la legislación de contratación administrativa otorga a este sistema.

- La formalización del contrato se efectúa por término medio en 34 días sobre la adjudicación definitiva. Un 40% de los expedientes fiscalizados incumplen el art. 39 de la LCE, que concede un plazo de 30 días para la formalización. Si bien la media más alta corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia, un mes y medio, el número mayor de expedientes que no respetan el plazo de 30 días tiene lugar en el IARA.

- El acta de comprobación del replanteo, indicativa del momento de inicio de la ejecución de las obras, según consta en el art. 127 del RCE, se realiza, salvo casos aislados, dentro del mes siguiente a la formalización del contrato, como obliga el citado artículo. La media de los casos analizados oscila en torno a los 24 días.

No obstante, la circunstancia de la tardía adjudicación de los contratos anteriormente citada, hace, en algunos casos, que el inicio de la ejecución tenga lugar en el año 1991, con lo que queda incumplido el principio de anualidad del presupuesto, regulado en el art. 41 LGHP.

- El tiempo transcurrido entre la adjudicación definitiva y la comprobación del replanteo se sitúa en una media de 64, 47 y 68 días en el IARA, Obras Públicas y Transportes y Educación y Ciencia, respectivamente.

- Las aplicaciones presupuestarias, a las que se han imputado los respectivos expedientes de contratación, se ajustan a la clasificación económica del gasto en lo que a capítulo, artículo y concepto se refiere, a la clasificación funcional en cuanto al programa y al anexo de inversiones de la Comunidad Autónoma en cuanto al proyecto. Los documentos contables instruidos al efecto están debidamente cumplimentados.

VII.3.2. Ejecución de las Inversiones

Se engloba en esta fase el análisis de todas aquellas circunstancias o riesgos que hayan acontecido o pudieran darse desde el momento de inicio de las obras, hasta la recepción provisional de las mismas, fecha desde la cual empieza a computar el plazo de garantía.

Cabe distinguir, en esta fase, aquellos contratos que fueron adjudicados en ejercicios anteriores a 1990, y aquellos que fueron adjudicados en el año 1990:

- Respecto a los primeros, la ejecución real, medida por la fase contable Obligaciones Reconocidas, sobre la anualidad comprometida se cifra en término medio en un 95%. Dicho análisis, realizado sobre expedientes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes refleja una ejecución a ritmo normal, cuando la adjudicación del contrato tiene lugar en un año anterior al analizado. No obstante lo indicado, los reajustes de anualidades preceptuados en el RCE, en caso de retrasos en la ejecución, no han tenido lugar en la mayor parte de las ocasiones en que fueron necesarios.

- En lo que a los contratos adjudicados en el ejercicio 1990 respecta, la ejecución real de las obras, en relación al montante de crédito comprometido para el citado ejercicio, es bastante inferior; así se alcanzó un 39% para la Consejería de Obras Públicas y Transportes, un 75% para la Consejería de Educación y Ciencia y un 22% para el IARA, resultando una ejecución media total del 43%. No practicándose, igualmente, el preceptivo reajuste de anualidades, a tenor del art. 152 del RCE.

Dicha situación es debida, además de por lo ya comentado sobre la deficiente estimación de anualidades y los retrasos acontecidos en la fase previa a la ejecución, a los motivos que a continuación se citan:

  - Existencia de solicitud de reformados al contrato original, que hacen que la ejecución de la obra se detenga de hecho durante la tramitación del mismo, aún cuando no de derecho, por cuanto no se adjunta en el expediente el correspondiente acta de suspensión temporal de la obra, a la que se refiere la cláusula 61 del PCAG.

  - Falta la aportación del Plan de Seguridad e Higiene en el trabajo a presentar por el contratista.

  - Adversidad en las condiciones climatológicas que dificultan, o hacen imposible, la ejecución de las obras durante un período determinado.

- Las certificaciones de obra se formalizan en base a lo preceptuado en el RD 1881/84 de 30 de agosto y la Orden de desarrollo, de 5 de diciembre del mismo año del Ministerio de Economía y Hacienda.

Aunque en la mayoría de los casos se respeta lo establecido en el art. 5 de la orden referida, pues las certificaciones son expedidas incluso en los períodos en que no se acredita ejecución de obra, no figura en éstas, por lo general, explicación mínima de dichas razones.

- A tenor del art. 144 del RCE la Administración deberá pagar intereses de demora sobre las cantidades acreditadas a partir del tercer mes de la fecha de certificación, siempre que el contratista lo requiera por escrito a aquélla. Este riesgo se presenta en la mayoría de los casos analizados, pues la media de pago sobrepasa los 6 meses, no fluctuando mucho en los Organos de contratación analizados. Sin embargo, el requerimiento referido, salvo un caso aislado, no se presenta.

La demora en el pago supera incluso, en algunos casos, el semestre, con lo que al riesgo anterior se une la posibilidad de que el contratista solicite la declaración de suspensión temporal de las obras, facultad que se confiere en el quinto párrafo del citado artículo.

VII.3.3. Liquidaciones Provisionales

La recepción provisional de las obras, según consta en el art. 170 del RCE, deberán tener lugar en el mes siguiente a la terminación, bien sea de forma parcial, si así se establece, o completa.

En base a las condiciones económicas del contrato, se procederá por la Administración a liquidar provisionalmente las obras realmente ejecutadas, cuyo resultado se le dará a conocer al contratista dentro de los 6 meses siguientes a la recepción, para que éste lo acepte o rechace en el plazo de 30 días, según se señala en el art. 172 del RCE.

Los aspectos significativos puestos de manifiesto son:

- El importe total de los saldos de liquidación analizados aumentan en un 8% de media, los importes adjudicados.

Estos incrementos quedan todos dentro del ámbito de la cláusula 62 del PCAG, donde se permite la inclusión en el saldo de liquidación de hasta un 10% del precio del contrato siempre que provenga de variaciones en el número de unidades realmente ejecutadas.

Por órganos de contratación, la Consejería de Obras Públicas y Transportes es la que más alto índice de aumento presenta, con más de un 9% y la más baja, la Consejería de Educación, con un 5%, quedando el IARA en torno al 8%.

- En lo que respecta a lo preceptuado en el art. 170 del RCE, se observa que en la práctica totalidad de los casos, no se respeta el plazo de un mes consignado para la recepción provisional computándose el mismo desde la última certificación ordinaria de obras.

Así pues, la Consejería de Educación y Ciencia emplea como media casi 9 meses, no respetándose el plazo legal en la mitad de los casos. Por contra, la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el IARA emplean 8 y 7 meses de media, respectivamente.

- La aprobación de la liquidación, a tenor del art. 172 del RCE, deberá realizarse antes de los 9 meses a partir de la recepción provisional, así como el pago del saldo de dicha liquidación.

Se utilizan 14 meses de media para la fase de la aprobación, oscilando entre los 22 meses empleados en la Consejería de Educación y Ciencia y los 9 meses del IARA, ambas cifras de media, siendo este organismo autónomo el único de los tres órganos de contratación analizados en que se respeta el plazo en la mayor parte de sus liquidaciones.

- Tanto la imputación presupuestaria de los saldos liquidatorios como la contabilización de los mismos se ha realizado correctamente.

- El pago del saldo de liquidación, sin embargo, no se hace, generalmente, en los 9 meses posteriores a la recepción provisional de las obras. Destaca el caso de la Consejería de Obras Públicas y Transportes donde se sobrepasan los 2 años de media para dicho pago.

Existe, a la vista de lo anterior, el riesgo de requerimiento por parte del contratista para la percepción de intereses de demora a partir del noveno mes de la recepción. Sin embargo no se tiene constancia de la presentación de tales reclamaciones.

VII.3.4. Reformado de proyectos de obras y obras complementarias

Las variaciones a los contratos originales deben tener carácter excepcional según se desprende de los arts. 48 y siguientes de la LCE, dado que los proyectos iniciales han de comprender todas las previsiones necesarias para la correcta ejecución de la obra.

En caso de que dicha reforma del proyecto primitivo deba tener lugar, ésta debe realizarse dentro de unos límites prudenciales para no desvirtuar el objeto de la contratación.

Conscientes de la dificultad que supone el catalogar a una variación de un proyecto como modificación o como obra complementaria en ciertos casos, con la consiguiente distinción en la legislación aplicable, arts. 150 y 153 del RCE, respectivamente, se hace necesario delimitar ambos conceptos:

- Se consideran modificaciones aquellas variaciones al proyecto primitivo con objeto de corregirlo, completarlo o mejorarlo, a la vista de los defectos, omisiones o imprevisiones detectadas durante su ejecución, con el fin de que la obra sirva para el fin que se proyectó. La realización deberá encomendarse al mismo contratista que el contrato original.

- Las obras complementarias van unidas a la idea de integridad y unidad por sí solas, con finalidad propia e independiente, aunque relacionadas con la obra principal, pudiendo ser, por tanto, adjudicadas a distinto contratista.

Esta matización no parece tenerse en cuenta en algunos casos en la Consejería de Obras Públicas y Transportes, donde se dan la totalidad de las obras complementarias analizadas.

Los aspectos significativos puestos de manifiesto son:

- La suma de los importes de los reformados y, en su caso, de las obras complementarias suponen, en términos porcentuales medios, un 24%, 13% y 12% respectivamente para las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y Educación y Ciencia e IARA, con respecto a la suma de los importes adjudicados originariamente.

- Las causas aducidas en los expedientes como justificación de la tramitación de modificaciones suelen responder a las siguientes:

  - Sustitución de elementos del proyecto original.

  - Adiciones o supresiones de los mismos.

  - Reposiciones por destrozos o daños.

  - Rediseño o adaptaciones de estructuras.

Estos motivos de reformados, dan una idea de la incorrección o al menos de la falta de previsión existente a la hora de la redacción del proyecto. Se estima al respecto, que el término "circunstancias técnicas imprevistas", al que alude el art. 149 del RCE, no se refiere a meras imprevisiones del proyecto de posible previsión, sino a circunstancias objetivamente imprevistas. Es decir, la justificación de la tramitación de modificaciones del contrato, no debe ocultar defectos de previsión o errores del proyecto que, con un estudio más cuidadoso, se hubieran evitado.

En el art. 63 del RCE y arts. 1 y 2 del Decreto 462/71, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos se contemplan los requisitos que la misma debe observar. En este último art. 2, así como en el 76 del RCE, se describe el papel a desempeñar por las oficinas de supervisión, denegando o autorizando las prescripciones técnicas del proyecto y compartiendo responsabilidad, por tanto, en el caso de imprevisiones o estimaciones defectuosas. El art. 154 del RCE llega más lejos, pues faculta a la Administración a promover la investigación para asignar responsabilidades; facultad, por otra parte, que nunca ha sido utilizada.

- La existencia de reformados, como ya se ha citado, influye sobremanera en el plazo de ejecución de las obras. Esta influencia se manifiesta en dos vertientes.

La primera es la prórroga concedida sobre el plazo inicialmente previsto para la propia ejecución de la obra modificada, si es que así procede, plazo generalmente respetado por el contratista. La segunda y más importante, es el retraso sufrido en la fecha de terminación por razones de los trámites que un modificado o complementario requiere, esto es, redacción, proposición, aprobación, etc. Este retraso es, en ocasiones, de más de un año, en contraposición al primero que no suele exceder de 4 ó 5 meses. Todo ello independientemente de los imprevistos que corren el riesgo de surgir al demorarse la entrega final, cuales son: problemas de suministro, circunstancias climatológicas adversas u otros imprevistos.

- En conexión con el párrafo anterior, añadir que los períodos de no ejecución como consecuencia de los reformados no son acompañados de acuerdos de suspensiones temporales, parciales o totales, como prescriben las cláusulas 61, 63 y 64 del PCAG. Este lapso suele ser cubierto con certificaciones a cero pesetas, sin hacer mención expresa de la causa de la posible paralización de las obras, como se señaló anteriormente.

- La ejecución del propio modificado suele realizarse al 100%, aunque a veces tiene lugar en el ejercicio siguiente, no practicándose reajuste alguno de la anualidad correspondiente.

- El sistema de adjudicación predominante en los contratos originales que han sido objeto de modificación es la subasta. Destacar, no obstante, el caso del IARA donde más de la mitad de los contratos reformados analizados, fueron adjudicados en su momento por contratación directa.

VIII. FINANCIACION DE PROYECTOS

En el Anexo I.1 se muestra la Liquidación de Ingresos del FCI al cierre del ejercicio presupuestario 1990 y en el Anexo VI se recoge la Liquidación de Resultas del FCI de ejercicios anteriores (derechos a cobrar) igualmente al cierre.

A continuación se exponen los aspectos más significativos obtenidos del análisis de los saldos que componen ambas liquidaciones.

VIII.1. Derechos Reconocidos

El criterio seguido por la Comunidad Autónoma para el reconocimiento de derechos, es el de contabilizar como tales, el importe de las certificaciones remitidas a la Administración Central para el cobro de los fondos. Así pues, la Comunidad Autónoma imputó al ejercicio presupuestario 1990, 46 certificaciones emitidas entre mayo de 1990 y marzo de 1991. Dicho criterio es consistente con el del ejercicio 1989, puesto que al mismo fueron imputadas certificaciones emitidas hasta marzo de 1990.

La cifra de Derechos Reconocidos ha ascendido a 63.477 M.P. Este importe se corresponde con la cantidad certificada por la Comunidad Autónoma deduciendo los importes anulados por la Administración Central que ascendieron a 2.672 M. P., según se explica en el apartado VIII.2.

Los Derechos Reconocidos durante el ejercicio están debidamente soportados por las correspondientes certificaciones, salvo en una certificación que por error fue emitida y contabilizada por 8.662 M.P., cuando lo debería haber sido por 8.710 M.P.; la diferencia de 48 M.P. ha sido rectificada en el ejercicio 1991.

Como se puso de manifiesto en la Introducción del Informe, la Ley 29/90, de 26 de diciembre, del FCI, cuya entrada en vigor se produce a partir del 1 de enero de 1990, modifica el procedimiento de transferencias de los recursos del Fondo de la Administración Central a las Comunidades Autónomas; así dispone que los Fondos serán transferidos del modo siguiente:

- Un 25% del importe del proyecto, cuando se haya producido la adjudicación de la obra o suministro, objeto de inversión.

- Un 50% del importe del proyecto, cuando la ejecución del mismo haya alcanzado igual porcentaje, debiendo haber transcurrido al menos dos trimestres desde la iniciación del ejercicio al que se refiere el Fondo.

- El 25% restante, cuando el proyecto se encuentre ejecutado en su totalidad y hayan transcurrido al menos tres trimestres desde la iniciación del ejercicio al que se refiere el Fondo.

Dicho procedimiento, en la práctica, sólo se ha seguido para los proyectos a financiar con el FCI/90, mientras que para aquellos proyectos financiados con Fondo de ejercicios anteriores el procedimiento seguido ha sido el de certificar conforme se van expidiendo las certificaciones mensuales de ejecución de obra.

La Ley, en defensa de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, preceptúa lo ya corroborado por las sentencias 63/86 y 183/88 del Tribunal Constitucional, en el sentido de que será suficiente para percibir los recursos del Fondo, la petición correspondiente al Organo de la Administración Central competente para su remisión.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, aún cuando la nueva Ley no le obliga, procede a justificar en qué proyectos se han invertido los Fondos al remitir las certificaciones a la Administración Central, puesto que en caso contrario, la Administración Central no remite los recursos correspondientes.

VIII.2. Derechos Anulados

Durante el ejercicio 1990 el importe de Derechos Anulados por certificaciones emitidas durante el período considerado, ha ascendido a 2.672 M. P.; las causas que motivaron dichas anulaciones son las que a continuación se exponen:

- 2.294 M.P. corresponden a un error de inclusión como Derechos Reconocidos del ejercicio 1990, cuando ya habían sido contabilizados como tales en el ejercicio presupuestario 1989. El error fue subsanado anulando y rectificando el apunte contable.

- 378 M.P. se corresponden con Derechos Reconocidos en base a certificaciones pertenecientes al FCI/90, FCI/88 y FCI/86. Dichas anulaciones se han producido por:

  - Anulación por defecto de forma al no adecuarse la certificación a la nueva normativa del Fondo.

  - Sobrepasar el importe de crédito definitivo del proyecto al emitir la última certificación del mismo.

  - Certificar por mayor importe sin tenerse en cuenta la cofinanciación del proyecto.

Por otro lado, se han producido anulaciones en la Liquidación de Resultas de Ingresos de Fondos del año 1988, debido a que se ha sobrepasado el crédito de los proyectos de inversión al emitirse la última certificación.

VIII.3. Percepción de Ingresos del Fondo

Durante el ejercicio presupuestario 1990, la Comunidad Autónoma ha recaudado en concepto del FCI 23.192 M.P. de los cuales 5.395 M.P. (anexo I.1) se corresponden con certificaciones emitidas en el citado ejercicio y 17.797 M.P. (anexo VI) con Derechos Reconocidos en ejercicios anteriores y que, a principios del ejercicio 1990, formaban parte del Estado de Resultas del FCI de ejercicios anteriores (Derechos a Cobrar).

El procedimiento seguido por la Comunidad para la contabilización de los importes recaudados es el de imputarlos directamente al concepto de ingresos correspondiente cuando se conoce su procedencia, y en caso contrario se incluye temporalmente en operaciones extrapresupuestarias, ingresos pendientes de aplicación, en tanto es identificada su procedencia y desglose por años, produciéndose el correspondiente ingreso en formalización.

El tiempo medio de permanencia, en operaciones extrapresupuestarias, de una peseta durante 1990, proveniente del FCI, es de 38 días antes de ser contabilizada en el Presupuesto de Ingresos.

Durante el ejercicio presupuestario 1990, el Estado precede a liquidar todos los pagos pendientes de fondos del ejercicio 1989 y anteriores. La recaudación de dichas liquidaciones han sido recibidas y contabilizadas por la Comunidad en enero de 1991.

La Cámara de Cuentas ha procedido a la conciliación de los cobros registrados en los diferentes ejercicios presupuestarios, por la Comunidad, relativo a los FCI/86, FCI/87, FCI/88 y FCI/89 y los pagos efectuados por el Estado por esos conceptos; para ello se ha servido tanto de las Liquidaciones del Presupuesto de Ingresos de la Junta de Andalucía relativas a los indicados años, como de las relaciones de pagos

emitidas por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda.

Los resultados extraídos de este análisis son:

Total Contabilizado por el Estado como pagado, (acumulado FCI/86, FCI/87, FCI/88 y FCI/89). ...	166.248 M. P.
Total Contabilizado por la Comunidad Autónoma como cobrado, (acumulado FCI/86, FCI/87, FCI/88 y FCI/89).....	161.919 M. P.
DIFERENCIA.	4.329 M. P.

Se solicitó explicación a la IGJA sobre esta diferencia detectada sin que, a la fecha de cierre, se haya producido.

Igualmente dicha cantidad no ha sido reflejada como Derecho Reconocido por la Comunidad Autónoma, en ninguno de los ejercicios presupuestarios sobre los que ha sido posible efectuar esta conciliación. En el anexo I.1, la columna de diferencia refleja 4.772 M. P. como derechos pendientes de reconocer del ejercicio 1989 y anteriores que no son tales; estos debieran haberse reconocido por cuanto el Estado los contabiliza como pagados.

Por otro lado, conviene hacer mención al contraste existente entre los importes recaudados por certificaciones emitidas durante el ejercicio 1990 y los pagos realizados por proyectos ejecutados durante el mismo período. La cifra de los cobros provenientes de la Administración Central, asciende tan sólo a 5.395 M. P., mientras que los pagos realizados por la Comunidad Autónoma ascienden a 33.181 M. P., lo que en términos porcentuales significa, que los cobros del FCI representan un 16% respecto a los pagos por esos mismos conceptos. Ello implica, que por cada 100 pesetas pagadas por la Comunidad, ésta recibe durante el ejercicio presupuestario en el que se materializó la inversión tan sólo 16 pesetas de la Administración Central, financiando el resto con recursos de la propia Comunidad (anexos I.1 y I.2).

Dicha situación es debida:

- Al desfase temporal existente entre la emisión de una certificación y la transferencia de los fondos provenientes de la Administración Central que se cifra en 162 días.

- Igualmente, y como se pone de manifiesto en el apartado VII.3 de este Informe, a los retrasos constatados en los distintos centros gestores analizados, para la adjudicación de los contratos que por término medio se producen en el segundo semestre del ejercicio presupuestario y al retraso en la elaboración de las liquidaciones de proyectos.

La circunstancia descrita en los centros gestores ha conducido a que la primera certificación remitida a la Administración Central para el cobro esté fechada en mayo de 1990.

Hay que hacer mención, por otro lado, a que un 10% de las certificaciones emitidas en 1990 se corresponden con Obligaciones Contraídas en ejercicios anteriores a 1990 y que, por tanto, podrían haberse certificado en los años en que se contrajeron las obligaciones. Ello ha contribuido al retraso que en el cobro de los Fondos se constata.

VIII.4. Evaluación del Control Interno

Como se puso de manifiesto en el Informe sobre el FCI/89, es a la Intervención General, centro directivo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, al que compete en última instancia controlar los importes adjudicados y las obras ejecutadas y certificar, para su cobro a la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Territoriales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

El sistema de control llevado a cabo durante el ejercicio que compete analizar no ha variado, en su forma sustancial, del seguido en ejercicios anteriores, toda vez que la llevanza del mismo se hace de forma manual, con idéntico procedimiento que el descrito en el Informe sobre el FCI/89.

De la fiscalización efectuada durante el ejercicio 1990, se han puesto de manifiesto las debilidades de control interno que se describen, con indicación de las consecuencias o riesgos que de ellas pueden derivarse:

- La IGJA no efectúa ni conciliaciones entre los pagos efectuados por la Administración Central y los Cobros contabilizados por la Comunidad Autónoma, ni seguimiento de las partidas conciliatorias. Como consecuencia de ello, se producen descuadres entre los cobros y pagos anteriormente descritos que se han cuantificado en 4.329 M.P. De dicho importe 4.032 M.P. se refieren al FCI/86.

- Al cierre del ejercicio presupuestario no se calculan los saldos pendientes de certificar de cada uno de los proyectos; dicho cálculo tiene lugar ya iniciado el siguiente ejercicio presupuestario. La situación descrita ha producido rechazos por parte de la Administración Central de certificaciones por sobrepasarse el crédito asignado al proyecto.

- En las fichas de proyectos cofinanciados FCI/FEDER, relativos a los años 1988 y 1989, dicha condición es apuntada manualmente al margen de la ficha y, a veces, no tenida en cuenta en el momento de certificarse la ejecución de un proyecto; ello ha ocasionado el rechazo de certificaciones por la Administración Central al sobrepasarse el crédito asignado al proyecto en concepto del FCI.

IX. ANEXOS

ANEXO I.1

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS AFECTADOS A LOS DISTINTOS FCIs. POR OPERACIONES REALIZADAS EN 1990

(En millones de Ptas.)

	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES: REMANENTES 31/12/89	MODIFICACIONES: OTROS AUMENTOS	MODIFICACIONES: BAJAS	(1) PREVISION DEFINITIVA	(2) DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS REALIZADOS	PENDIENTE DE COBRO	(1)-(2) DIFERENCIAS
FCI. 1990	54.841	-	-	7.299	47.542	39.394	1.938	37.456	8.148
FCI. 1989	-	9.037	-	-	9.037	8.451	1.539	6.912	586
FCI. 1988	-	5.122	-	-	5.122	5.698	1.400	4.298	(576)
FCI. 1987	-	2.965	-	-	2.965	2.335	289	2.046	630
FCI. 1986	-	4.959	-	-	4.959	3.590	7	3.583	1.369
FCI. 1985 Y ANTERIORES	-	6.772	-	-	6.772	4.009	222	3.787	2.763
TOTALES	54.841	28.855	-	7.299	76.397	63.477	5.395	58.082	12.920

ANEXO I.2

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LOS CREDITOS AFECTADOS A LOS DISTINTOS FCIs. POR OPERACIONES REALIZADAS EN 199

(En millones de Ptas.)

	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES: INCORPOR.	MODIFICACIONES: OTROS AUMENTOS	MODIFICACIONES: (BAJAS)	(1) CREDITO DEFINITIVO	(2) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	(1)-(2) REMANENTES
FCI. 1990	45.957	-	11.067	(9.482)	47.542	35.543	22.790	12.753	11.999
FCI. 1989	-	11.930	848	(848)	11.930	8.762	5.371	3.391	3.168
FCI. 1988	-	6.445	482	(482)	6.445	4.710	3.463	1.247	1.735
FCI. 1987	-	2.213	376	(376)	2.213	1.220	726	494	993
FCI. 1986	-	1.511	-	-	1.511	590	350	240	921
FCI. 1985 Y ANTERIORES	-	2.171	-	-	2.171	986	481	505	1.185
TOTALES	45.957	24.270	12.773	(11.188)	71.812	51.811	33.181	18.630	20.001

ANEXO 11.1

RELACION DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI 90

FUENTE: ELABORACION PROPIA

(En millones de Ptas.)

SECCION	CODIGO PROY.	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO FINAL (1)	TOTAL COMPROMETIDO (2)	(2)/(1)	TOTAL OBLIG. RECONOCIDAS (3)	(3)/(1)	PAGOS REALIZADOS (4)	(4)/(1)	(4)/(3)
FOMENTO	0066	Ampliación Residencias Tiempo Libre.	40	37	93%	33	83%	9	23%	27%
	0000	En Materia de Infraestructura Turística	285	285	100%	0	-	0	0%	-
	0067	Suministro de mobiliario y enseres para Residencias Tiempo Libre.	17	10	59%	10	59%	6	35%	60%
	0076	Transferencias a CC.LL. para construcción de Naves Industriales. Almería.	30	30	100%	30	100%	0	0%	0%
	0077	Transferencias a CC.LL. para construcción de Naves Industriales. Cádiz.	30	30	100%	0	0%	0	0%	-
	0078	Transferencias a CC.LL. para construcción de Naves Industriales. Córdoba.	30	30	100%	30	100%	0	0%	0%
	0079	Transferencias a CC.LL. para construcción de Naves Industriales. Granada.	30	30	100%	0	0%	0	0%	-
	0080	Transferencias a CC.LL. para construcción de Naves Industriales. Huelva.	30	30	100%	0	0%	0	0%	-
	0081	Transferencias a CC.LL. para construcción de Naves Industriales. Jaén.	30	0	0%	0	0%	0	0%	-
	0082	Transferencias a CC.LL. para construcción de Naves Industriales. Málaga.	30	30	100%	12	40%	12	40%	100%
	0083	Transferencias a CC.LL. para construcción de Naves Industriales. Sevilla.	30	23	77%	0	0%	0	0%	-
	0135	Areas de servicios turísticos módulos playa.	55	52	95%	52	95%	0	0%	0%
	0136	A CC.LL. en materia de infraestructura turística.	0	0	-	0	-	0	-	-
	0137	Desarrollo turístico áreas rurales.	110	94	85%	92	84%	0	0%	0%
OBRAS P.	0259	Construcción de viviendas, incluso incidencias. Almería.	432	432	100%	274	63%	268	62%	98%
	0260	Actuaciones singulares en el sector vivienda, incluso incidencias ofic. Rehab., etc. Almería.	27	27	100%	25	93%	19	70%	76%
	0261	Construcción de viviendas, incluso incidencias. Cádiz.	1.015	994	98%	812	80%	684	67%	84%
	0262	Actuaciones singulares en el sector vivienda, incluso incidencias ofic. Rehab., etc. Cádiz.	110	92	84%	18	16%	9	8%	50%
	0263	Construcción de viviendas, incluso incidencias. Córdoba.	1.004	1.004	100%	979	98%	939	94%	96%
		SUMA Y SIGUE	3.335	3.230		2.367		1.946		

(En millones de Ptas.)

SECCION	CODIGO PROY.	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO FINAL (1)	TOTAL COMPROMETIDO (2)	(2)/(1)	TOTAL OBLIG. RECONOCIDAS (3)	(3)/(1)	PAGOS REALIZADOS (4)	(4)/(1)	(4)/(3)
	0264	Actuaciones singulares en el sector vivienda, incluso incidencias ofic. Rehab., etc. Córdoba.	47	41	87%	14	30%	9	19%	64%
	0265	Construcción de viviendas, incluso incidencias. Granada.	795	777	98%	642	81%	430	54%	67%
	0266	Actuaciones singulares en el sector vivienda, incluso incidencias ofic. Rehab., etc. Granada.	20	20	100%	5	25%	2	10%	40%
	0267	Construcción de viviendas, incluso incidencias. Huelva.	718	717	100%	693	97%	490	68%	71%
	0268	Actuaciones singulares en el sector vivienda, incluso incidencias ofic. Rehab., etc. Huelva.	20	20	100%	20	100%	19	95%	95%
	0269	Construcción de viviendas, incluso incidencias. Jaén.	957	955	100%	926	97%	840	88%	91%
	0270	Actuaciones singulares en el sector vivienda, incluso incidencias ofic. Rehab., etc. Jaén.	71	30	42%	16	23%	0	0%	0%
	0271	Construcción de viviendas, incluso incidencias. Málaga.	1.127	1.110	98%	840	75%	658	58%	78%
	0272	Actuaciones singulares en el sector vivienda, incluso incidencias ofic. Rehab., etc. Málaga.	282	268	95%	56	20%	31	12%	61%
	0273	Construcción de viviendas, incluso incidencias. Sevilla.	1.134	1.133	100%	1.093	96%	995	88%	91%
	0274	Actuaciones singulares en el sector vivienda, incluso incidencias ofic. Rehab., etc. Sevilla.	130	130	100%	23	18%	7	5%	30%
	0284	Estudios, esquemas y propuestas de Ordenación	40	39	98%	12	30%	5	13%	42%
	0285	Cartografía para el Planeamiento Territorial y Urbano.	96	94	98%	50	52%	8	8%	16%
	0290	Redacción, seguimiento, planeamiento urbanístico, estudios y cartografía de apoyo.	244	214	88%	61	25%	12	5%	20%
	0291	Suelo: polígonos de gestión no delegadas, Exprop., adq. y preparación suelo. Actuaciones de apoyo.	42	39	93%	18	43%	13	31%	72%
	0292	Transferencias a EPSA. Ejecución del subprograma de suelo.	797	797	100%	797	100%	737	92%	92%
	0293	Redac. y seguim. planeam. y convenios en materia de planeamiento y gestión disciplina urbanística.	126	115	91%	53	42%	1	1%	2%
	0315	Abastecimiento y saneamiento Almería provincia y capital.	50	45	90%	7	14%	7	14%	100%
	0316	Conducción abastecimiento San Cristobal. FEDER.	86	86	100%	86	100%	59	69%	69%
	0317	Abastecimiento y saneamiento integral Guadalete y Litoral	578	578	100%	390	67%	347	60%	89%
		SUMA Y SIGUE	10.695	10.438		8.169		5.619		

ANEXO II.1

(En millones de Ptas.)

SECCION	CODIGO PROY.	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO FINAL (1)	TOTAL COMPROMETIDO (2)	(2)/(1)	TOTAL OBLIG. RECONOCIDAS (3)	(3)/(1)	PAGOS REALIZADOS (4)	(4)/(1)	(4)/(3)
	0318	Abastecimiento y saneamiento cuenca del Guadalquivir provincia de Córdoba.	50	49	98%	46	92%	0	0%	0%
	0319	Conducción c-100 Río Verde-Almuñecar. FEDER.	29	29	100%	28	97%	0	0%	0%
	0320	Canalizaciones de Granada II Fase. FEDER.	227	227	100%	56	25%	0	0%	0%
	0321	Abastecimiento y saneamiento Costa La Luz y provincia de Huelva.	265	246	93%	246	93%	150	57%	61%
	0322	Abastecimiento y saneamiento cuenca del Guadalquivir provincia de Jaén.	352	349	99%	164	47%	2	1%	1%
	0323	Abastecimiento y saneamiento provincia de Málaga y capital.	876	863	99%	848	97%	509	58%	60%
	0324	Emisario Aljarafe II 1ª Fase. FEDER.	8	8	100%	8	100%	8	100%	100%
	0325	Emisario Aljarafe II 2ª Fase. FEDER.	4	4	100%	4	100%	4	100%	100%
	0326	Edar. San Jerónimo. FEDER.	174	174	100%	174	100%	106	61%	61%
	0327	Abastecimiento y saneamiento Sevilla y Área Metropolitana.	1.070	1.070	100%	935	87%	378	35%	40%
	0328	Estudios y proyectos, revisiones de precios, adicionales y otras obras.	447	385	86%	337	75%	81	18%	24%
	0329	Subvenciones a Corporaciones Locales.	300	300	100%	152	51%	41	14%	27%
	0457	2-AL-107 C-323 Olula del Río Portaloa. FEDER	23	23	100%	23	100%	0	0%	0%
	0458	2-AL_125 AL-840 Olula del Río Cantera de Macael. FEDER.	139	139	100%	113	81%	0	0%	0%
	0459	2-AL-137-AL-401 Dalías-Berja. VAriante Dalías.	89	89	100%	89	100%	24	27%	27%
	0460	1-CA-128-C-440 P.K. 86 al 93 Acondicionamiento y mejora. FEDER.	19	19	100%	0	0%	0	0%	-
	0461	3-CA-126-CA-604 Acondicionamiento y variante de Rota. FEDER.	199	199	100%	54	27%	0	0%	0%
	0462	1-CO-125-N-324 Variante de Bujalance-Cañete de las Torres. FEDER.	21	21	100%	21	100%	9	43%	43%
	0463	2-CO-127-C-330 Cabra-Monturque. FEDER.	52	52	100%	52	100%	52	100%	100%
	0464	2-CO-137-C-3312 Ecija-La Rambla. Acondicionamiento. FEDER.	80	80	100%	0	0%	0	0%	-
	0465	2-CO-136-C-121 Posadas-Fuencubiertas.	100	100	100%	100	100%	49	49%	49%
	0466	1-GR-117-C-336 Venalua-Ventas Las Navas. FEDER.	0	0	-	0	-	0	-	-
	0467	1-GR-172 Rambla de Baul-Baza.	655	655		655	100%	559	85%	85%
	0468	1-GR-174-171 Rambla El Grao-Rambla de Baul. Acondicionamiento.	1.214	1.214	100%	1.214	100%	1.214	100%	100%
	0469	4-GR-133 Santa Fe-La Mala.	91	91	100%	26	29%	26	29%	100%
	0470	1-GR-165-168 Molinillo. Intersección N-324. FEDER.	665	665	100%	665	100%	6	1%	1%
		SUMA Y SIGUE	17.844	17.489		14.179		9.837		

(En millones de Ptas.)

SECCION	CODIGO PROY.	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO FINAL (1)	TOTAL COMPROMETIDO (2)	(2)/(1)	TOTAL OBLIG. RECONOCIDAS (3)	(3)/(1)	PAGOS REALIZADOS (4)	(4)/(1)	(4)/(3)
	0471	1-GR-141-170-N-342 Rambla del Grao. Acondicionamiento y desdoblamiento. FEDER.	522	522	100%	522	100%	490	94%	94%
	0472	1-GR-154 Variante de Granada 1º Tramo.	989	989	100%	976	99%	623	63%	64%
	0473	1-Gr-163-164 Variante de Granada 2º Tramo.	1.337	1.337	100%	1.337	100%	1.337	100%	100%
	0474	2-H-116-C-421 Nerva-La Aulaga. Acondicionamiento. FEDER.	78	78	100%	78	100%	77	99%	99%
	0475	2-H-123-C-435 Prolongación C-435. Acondicionamiento. FEDER.	87	87	100%	87	100%	73	84%	84%
	0476	2-H-119-H-620 Variante de Palos. FEDER.	45	45	100%	45	100%	40	89%	89%
	0477	2-H-130-H-414 Aljaraque. Acondicionamiento. FEDER.	116	116	100%	116	100%	45	39%	39%
	0478	1-J-128-N-324 Huelma-Guadahortuna. FEDER.	134	134	100%	134	100%	134	100%	100%
	0479	1-MA-130-133 Antequera-Archidona. Desdoblamiento. FEDER.	52	52	100%	50	96%	50	96%	100%
	0480	1-MA-131-132-N-331 Mollina-Antequera. FEDER.	334	334	100%	333	100%	333	100%	100%
	0481	1-MA-110-C-341 P.K. 25 al 42,17 Acondicionamiento. FEDER.	26	26	100%	21	81%	21	81%	100%
	0482	1-MA-102-134 Archidona mVte. y desdoblamiento. FEDER.	100	100	100%	99	99%	20	20%	20%
	0483	1-SE-157-N-334 Estepa-Limite Provincia de Sevilla. FEDER.	37	37	100%	37	100%	37	100%	100%
	0484	1-SE-134-SE-424-434 El Coronil Variante. FEDER.	35	35	100%	35	100%	35	100%	100%
	0485	1-SE-121-N-334 Mercasevilla-Montecarmelo.	752	752	100%	752	100%	752	100%	100%
	0486	2-SE-143-SE-421 La Aulaga. Intersección N-433.	145	145	100%	145	100%	97	67%	67%
	0487	1-SE-182 Paso Territoriel Camas-San Lazaro. FEDER.	1.250	1.250	100%	1.250	100%	872	70%	70%
	0488	Previsión de Incidencias.	1.404	1.404	100%	1.271	91%	649	46%	51%
	0508	Variante P.K. 7,100 e Estación de Arahal.	123	123	100%	123	100%	10	8%	8%
	0509	Variante de Utera. Infraestructura y Vía.	200	200	100%	197	99%	0	0%	0%
	0510	Estación de autobuses y refúgios.	250	229	92%	166	66%	85	34%	51%
	0511	Actuaciones de transporte de mercancias.	67	35	52%	17	25%	17	25%	100%
	0512	Resto actuaciones en eje ferroviario transversal.	478	478	100%	283	59%	61	13%	22%
	0513	Estudios, Proyectos, Liquidaciones y otras obras.	50	40	80%	24	48%	13	26%	54%
	0514	Proyectos y Obras para mejora y desarrollo infraestructura flota pesquera.	379	376	99%	353	93%	185	49%	52%
	0515	Proyectos y Obras para mejora y desarrollo infraestructura flota naútico-deportiva.	343	341	99%	171	50%	139	41%	81%
	0516	Proyectos y Obras de Dragados y grandes reparaciones.	165	155	94%	148	90%	110	67%	74%
	0517	Construcciones de apeaderos, terminales y estaciones de autobuses.	110	98	89%	21	19%	7	6%	33%
		SUMA Y SIGUE	27.452	27.007		22.970		16.149		

ANEXO 11 5

(En millones de Ptas.)

SECCION	CODIGO PROY.	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO FINAL (1)	TOTAL COMPROMETIDO (2)	(2)/(1)	TOTAL OBLIG. RECONOCIDAS (3)	(3)/(1)	PAGOS REALIZADOS (4)	(4)/(1)	(4)/(3)
EDUCACION	0764	Construcción y Equipamiento de Centros. Almería.	305	305	100%	289	95%	263	86%	91%
	0765	Construcción y Equipamiento de Centros. Cádiz.	548	548	100%	513	94%	377	69%	73%
	0766	Construcción y Equipamiento de Centros. Córdoba.	442	442	100%	370	84%	315	71%	85%
	0767	Construcción y Equipamiento de Centros. Granada.	493	493	100%	297	60%	191	39%	64%
	0768	Construcción y Equipamiento de Centros. Huelva.	285	285	100%	186	65%	127	45%	68%
	0769	Construcción y Equipamiento de Centros. Jaén.	382	382	100%	339	89%	243	64%	72%
	0770	Construcción y Equipamiento de Centros. Málaga.	586	586	100%	454	77%	365	62%	80%
	0771	Construcción y Equipamiento de Centros. Sevilla.	905	905	100%	814	90%	603	67%	74%
	0791	Construcción y Equipamiento de Centros. Almería.	282	282	100%	244	87%	203	72%	83%
	0792	Construcción y Equipamiento de Centros. Cádiz.	448	448	100%	213	48%	153	34%	72%
	0793	Construcción y Equipamiento de Centros. Córdoba.	400	400	100%	352	88%	329	82%	93%
	0794	Construcción y Equipamiento de Centros. Granada.	153	153	100%	14	9%	6	4%	43%
	0795	Construcción y Equipamiento de Centros. Huelva.	253	253	100%	130	51%	83	33%	64%
	0796	Construcción y Equipamiento de Centros. Jaén.	344	344	100%	339	99%	260	76%	77%
	0797	Construcción y Equipamiento de Centros. Málaga.	491	490	100%	426	87%	341	69%	80%
	0798	Construcción y Equipamiento de Centros. Sevilla.	744	744	100%	508	68%	339	46%	67%
	0805	Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Construcción.	47	47	100%	47	100%	44	94%	94%
	0806	Obras de ampliación, reforma y mejora en la Universidad de Granada.	120	120	100%	44	37%	18	15%	41%
	0807	Adaptación del Hospital de la Merced para los estudios del Colegio Universitario.	221	221	100%	61	28%	0	0%	0%
	0808	Ampliación del Campus Universitario para albergar E.U. de E.G.B. de Empresariales y Politécnica.	300	300	100%	293	98%	118	39%	40%
	0809	Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Construcción.	300	300	100%	164	55%	0	0%	0%
	3250		72	72	100%	59	82%	0	0%	0%
	3251		221	221	100%	221	100%	0	0%	0%
	3252		138	138	100%	138	100%	0	0%	0%
CULTURA	0855	Construcc., remodelac., equip. y/o adq. de fondos para inst. culturales: Filmoteca Andalucía.	30	21	70%	4	13%	3	10%	75%
	0856	Construcc., remodelac., equip. y/o adq. de fondos para inst. culturales: Centro Docencia Musical.	30	28	93%	6	20%	2	7%	33%
	0857	Construcc., remodelac., equip. y/o adq. de fondos para inst. culturales: Biblioteca Andalucía.	80	80	100%	69	86%	44	55%	64%
	0858	Construcc., remodelac., equip. y/o adq. de fondos para inst. culturales: Centro Andaluz de Teatro.	36	36	100%	35	97%	35	97%	100%
	0859	Proyectos, reforma., liquid. e IVA de instituciones culturales.	20	20	100%	10	50%	10	50%	100%
		SUMA Y SIGUE	36.128	35.671		29.609		20.621		

ANEXO II.6

(En millones de Ptas.)

SECCION	CODIGO PROY.	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO FINAL (1)	TOTAL COMPROMETIDO (2)	(2)/(1)	TOTAL OBLIG. RECONOCIDAS (3)	(3)/(1)	PAGOS REALIZADOS (4)	(4)/(1)	(4)/(3)
	0860	Adquisición. equip. e instalación de bibliotecas públicas.	95	83	87%	71	75%	0	0%	0%
	0861	Adquisición y transportes de lotes bibliográficos para bibliotecas públicas.	107	95	89%	32	30%	0	0%	0%
	0869	Construcción Albergue Juvenil de Motril.	64	0	0%	0	0%	0	0%	-
	0874	Construcc. y remod. instalac. deportivas y centros rendim. deport. Com. Autón. Estadio Juv. Almería.	160	156	98%	0	0%	0	0%	-
	0875	Construcc. y remod. instalac. deportivas y centros rendim. deport. Com. Autón. "La Fuensanta" Córdoba	120	120	100%	8	7%	0	0%	0%
	0876	Construcc. y remod. instalac. deportivas y centros rendim. deport. Com. Autón. Ciudad deport. Huelva.	120	120	100%	61	51%	0	0%	0%
	0877	Construcc. y remod. instalac. deportivas y centros rendim. deport. Com. Autón. Parque deport. Linares	8	8	100%	1	13%	1	13%	100%
	0878	Construcc. y remod. instalac. deportivas y centros rendim. deport. Com. Autón. Estadio Juv. Málaga.	83	81	98%	76	92%	65	78%	86%
	0879	Instalaciones Deportivas. (Proyectos, reformados, liquidaciones, IVA, etc.).	329	323	98%	232	71%	85	26%	37%
	3229	Construc., remod., equipto. y adquis. F. C.A.	62	62	100%	62	100%	62	100%	100%
	3289	A INTUR-JOVEN, S.A.	93	93	100%	93	100%	0	0%	0%
A.M.A.	0921	Plan de Saneamiento Integral. Residuos Industriale	454	269	59%	81	18%	0	0%	0%
I.A.R.A.	1049	Infraestructura de regadios. Almería.	130	124	95%	78	60%	1	1%	1%
	1050	Infraestructura de regadios. Cádiz.	590	590	100%	589	100%	386	65%	66%
	1051	Infraestructura de regadios. Córdoba.	1.045	1.045	100%	1.010	97%	533	51%	53%
	1052	Infraestructura de regadios. Granada.	107	106	99%	79	74%	17	16%	22%
	1053	Infraestructura de regadios. Huelva.	30	30	100%	30	100%	0	0%	0%
	1054	Infraestructura de regadios. Jaén.	420	396	94%	281	67%	51	12%	18%
	1055	Infraestructura de regadios. Málaga.	50	50	100%	18	36%	0	0%	0%
	1056	Infraestructura de regadios. Sevilla.	804	803	100%	3	0%	3	0%	100%
	1057	Infraestructura de regadios. Varias provincias.	88	82	93%	39	44%	0	0%	0%
	1058	Infraestructura y desarrollo rural. Almería.	205	205	100%	185	90%	90	44%	49%
	1059	Infraestructura y desarrollo rural. Cádiz.	255	247	97%	103	40%	2	1%	2%
	1060	Infraestructura y desarrollo rural. Córdoba.	539	484	90%	199	37%	59	11%	30%
	1061	Infraestructura y desarrollo rural. Granada.	130	100	77%	92	71%	0	0%	0%
	1062	Infraestructura y desarrollo rural. Huelva.	355	326	92%	222	63%	19	5%	9%
	1063	Infraestructura y desarrollo rural. Jaén.	248	248	100%	177	71%	69	28%	39%
	1064	Infraestructura y desarrollo rural. Málaga.	287	286	100%	254	89%	144	50%	57%
		SUMA Y SIGUE	43.106	42.203		33.685		22.208		

ANEXO II.7

(En millones de Ptas.)

SECCION	CODIGO PROY.	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO FINAL (1)	TOTAL COMPROMETIDO (2)	(2)/(1)	TOTAL OBLIG. RECONOCIDAS (3)	(3)/(1)	PAGOS REALIZADOS (4)	(4)/(1)	(4)/(3)
	1065	Infraestructura y desarrollo rural. Sevilla.	427	427	100%	381	89%	14	3%	4%
	1066	Infraestructura y desarrollo rural. Varias prov.	601	454	76%	287	48%	22	4%	8%
	1067	Creación áreas forestales y lucha contra erosión. Almería.	188	188	100%	122	65%	64	34%	52%
	1068	Creación áreas forestales y lucha contra erosión. Cádiz.	35	34	97%	28	80%	20	57%	71%
	1069	Creación áreas forestales y lucha contra erosión. Córdoba.	81	81	100%	57	70%	14	17%	25%
	1070	Creación áreas forestales y lucha contra erosión. Granada.	178	178	100%	75	42%	32	18%	43%
	1071	Creación áreas forestales y lucha contra erosión. Huelva.	104	102	98%	54	52%	5	5%	9%
	1072	Creación áreas forestales y lucha contra erosión. Jaén.	150	83	55%	14	9%	0	0%	0%
	1073	Creación áreas forestales y lucha contra erosión. Málaga.	162	162	100%	96	59%	29	18%	30%
	1074	Creación áreas forestales y lucha contra erosión. Sevilla.	151	145	96%	101	67%	4	3%	4%
S.A.S.	1088	Construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria. Almería.	82	75	91%	0	0%	0	0%	-
	1089	Construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria. Cádiz.	107	107	100%	107	100%	107	100%	100%
	1090	Construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria. Córdoba.	130	88	68%	6	5%	0	0%	0%
	1091	Construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria. Granada.	62	39	63%	6	10%	2	3%	33%
	1092	Construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria. Huelva.	110	104	95%	2	2%	1	1%	50%
	1093	Construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria. Jaén.	129	92	71%	28	22%	0	0%	0%
	1094	Construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria. Málaga.	190	142	75%	34	18%	6	3%	18%
	1095	Construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria. Sevilla.	189	184	97%	59	31%	8	4%	14%
	1096	Equipamiento de Centros de Atención Primaria.	228	228	100%	53	23%	3	1%	6%
	1104	Construcción del Hospital Gral. Básico de Osuna.	239	239	100%	207	87%	205	86%	99%
	0000		172	168	98%	62	36%	3	2%	5%
		SUMA Y SIGUE	46.821	45.523		35.464		22.747		

ANEXO II.8

(En millones de Ptas.)

SECCION	CODIGO PROY.	DENOMINACION DEL PROYECTO	CREDITO FINAL (1)	TOTAL COMPROMETIDO (2)	(2)/(1)	TOTAL OBLIG. RECONOCIDAS (3)	(3)/(1)	PAGOS REALIZADOS (4)	(4)/(1)	(4)/(3)
I.A.S.S.	1125	Centros de Servicios Sociales Especializados. Co.	51	12	24%	0	0%	0	0%	-
	1126	Centros de Servicios Sociales Especializados. Gr.	51	0	0%	0	0%	0	0%	-
	1127	Centros de Servicios Sociales Especializados. Ja.	51	0	0%	0	0%	0	0%	-
	1128	Centros de Servicios Sociales Especializados. Ma.	51	2	4%	3	6%	3	6%	100%
	1129	Centros de Servicios Sociales Especializados. Se.	101	100	99%	37	37%	27	27%	73%
	1130	Equipamiento de Centros de Servicios Sociales Especializados y Comunitarios.	143	29	20%	0	0%	0	0%	-
	1131	Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Al.	32	0	0%	0	0%	0	0%	-
	1132	Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Ca.	32	32	100%	0	0%	0	0%	-
	1133	Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Co.	32	1	3%	0	0%	0	0%	-
	1134	Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Gr.	32	30	94%	5	16%	0	0%	0%
	1135	Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Hu.	32	3	9%	0	0%	0	0%	-
	1136	Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Ja.	31	17	55%	14	45%	1	3%	7%
	1137	Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Ma.	31	0	0%	0	0%	0	0%	-
	1138	Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Se.	31	0	0%	0	0%	0	0%	-
	1139	Centros de Servicios Sociales Especializados. (Reforma y Ampliación).	20	20	100%	20	100%	12	60%	60%
		T O T A L	47.542	45.769	96%	35.543	75%	22.790	48%	64%

ANEXO III.1

EJECUCION DEL F.C.I. POR SECCIONES POR OPERACIONES REALIZADAS EN 1990

ACTUALES Y REMANENTES

(En millones de Ptas.)

SECCIONES		CREDITO INICIAL	CRED.DEF. "C"	DISPOSICION "D"	D/C	OBLIG. REC. "O"	O/C	O/D	PAGOS REALIZ. "P"
12 GOBERNACION	A	0	0	0	-	0	-	-	0
	R	0	445	445	100%	149	33%	33%	95
	T	0	445	445	100%	149	33%	33%	95
13 FOM. Y TRAB.	A	793	747	680	91%	259	35%	38%	27
	R	0	826	738	89%	516	62%	70%	188
	T	793	1.573	1.418	90%	775	49%	55%	215
14 HAC. Y PLAN.	A	0	0	0	-	0	-	-	0
	R	0	30	28	93%	9	30%	32%	7
	T	0	30	28	93%	9	30%	32%	7
15 OBRAS PUBL.	A	31.751	26.706	26.327	99%	22.711	85%	86%	16.122
	R	0	8.908	8.752	98%	5.263	59%	60%	3.421
	T	31.751	35.614	35.079	98%	27.974	79%	80%	19.543
16 AGRIC. Y P.	A	0	0	0	-	0	-	-	0
	R	0	401	399	100%	168	42%	42%	127
	T	0	401	399	100%	168	42%	42%	127
18 EDUCAC. Y C.	A	9.406	8.480	8.479	100%	6.515	77%	77%	4.378
	R	0	3.261	3.260	100%	2.878	88%	88%	2.206
	T	9.406	11.741	11.739	100%	9.393	80%	80%	6.584
19 CULTURA	A	1.490	1.437	1.325	92%	760	53%	57%	307
	R	0	2.229	2.201	99%	1.809	81%	82%	710
	T	1.490	3.666	3.526	96%	2.569	70%	73%	1.017
01.31 A.M.A.	A	767	454	269	59%	81	18%	30%	0
	R	0	1.341	1.318	98%	1.094	82%	83%	658
	T	767	1.795	1.587	88%	1.175	65%	74%	658
16.31 I.A.R.A.	A	8.116	7.361	6.977	95%	4.574	62%	66%	1.578
	R	0	3.841	3.782	98%	2.962	77%	78%	1.974
	T	8.116	11.202	10.759	96%	7.536	67%	70%	3.552
17.31 I.N.S.	A	1.800	1.639	1.466	89%	564	34%	38%	335
	R	0	1.764	1.720	98%	997	57%	58%	732
	T	1.800	3.403	3.186	94%	1.561	46%	49%	1.067
17.33 I.N.S.S.	A	718	718	246	34%	79	11%	32%	43
	R	0	1.224	917	75%	423	35%	46%	273
	T	718	1.942	1.163	60%	502	26%	43%	316
TOTALES	A	54.841	47.542	45.769	96%	35.543	75%	78%	22.790
	R	0	24.270	23.560	97%	16.268	67%	69%	10.391
	T	54.841	71.812	69.329	97%	51.811	72%	75%	33.181

ANEXO III.2

ESTADO COMPARATIVO POR SECCIONES DEL FCI 90

(En millones de Ptas.)

	SECCION	CREDITO INICIAL	%	CREDITO DEFINITIVO	%	Nº PROYECTOS	%
13	FOMENTO Y T.	793	1%	747	2%	14	8%
15	OBRAS PUBLICAS	31.751	58%	26.706	56%	79	42%
18	EDUCACION Y C.	9.406	17%	8.480	18%	24	13%
19	CULTURA	1.490	3%	1.437	3%	16	9%
01.31	A.M.A.	767	1%	454	1%	1	1%
16.31	I.A.R.A.	8.116	15%	7.361	15%	26	14%
17.31	S.A.S.	1.800	3%	1.639	3%	11	6%
17.33	I.A.S.S.	718	1%	718	2%	15	8%
	TOTALES	54.841	100%	47.542	100%	186	100%

ANEXO IV

CLASIFICACION POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO 1990

(En millones de Ptas.)

	OBRAS PUBLICAS	AGRICULTURA PESCA Y GANADERIA	VIVIENDA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	SANIDAD	EDUCACION	OTRAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	TOTALES
FCI. 1990	11.238	4.574	6.435	811	643	7.275	4.567	35.543
FCI. 1989	241	1.659	932	511	637	2.702	2.080	8.762
FCI. 1988	458	1.266	356	300	347	1.342	641	4.710
FCI. 1987	23	125	255	6	347	303	161	1.220
FCI. 1986	158	47	6	26	76	232	45	590
FCI. 1985 Y ANTERIORES	13	32	720	6	13	108	94	986
TOTALES	12.131	7.703	8.704	1.660	2.063	11.962	7.588	51.811

ANEXO V

FLUJO DE COBROS Y PAGOS EN EL EJERCICIO 1990

(En millones de Ptas.)

	JUSTIFICADO AÑOS ANTERIORES PENDIENTE COBRO	JUSTIFICADO EJERCICIO	COBRADO	PENDIENTE DE COBRO	PENDIENTE PAGOS AÑOS ANTERIORES	RECONOCIDO EJERCICIO	PAGADO	PENDIENTE DE PAGO
FCI. 1990	-	39.394	1.938	37.456	-	35.543	22.790	12.753
FCI. 1989	11.028	8.451	12.567	6.912	7.958	8.762	13.314	3.406
FCI. 1988	3.911	5.698	4.957	4.652	2.379	4.710	5.495	1.594
FCI. 1987	2.085	2.335	2.359	2.061	790	1.220	1.430	580
FCI. 1986	1.346	3.590	738	4.198	588	590	874	304
FCI. 1985 Y ANTERIORES	486	4.009	633	3.862	618	986	884	720
TOTALES	18.856	63.477	23.192	59.141	12.333	51.811	44.787	19.357

ANEXO VI

ESTADO DE RESULTAS DEL FCI DE EJERCICIOS ANTERIORES (DERECHOS A COBRAR)

(En millones de Ptas.)

	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1-1-1990	AUMENTOS/ (BAJAS)	COBROS REALIZADOS	PENDIENTE DE COBRO
FCI. 1989	11.028	-	11.028	0
FCI. 1988	3.957	(46)	3.557	354
FCI. 1987	2.085	-	2.070	15
FCI. 1986	1.346	-	731	615
FCI. 1985 Y ANTERIORES	486	-	411	75
TOTALES	18.902	(46)	17.797	1.059

ANEXO VII

ESTADO DE RESULTAS DEL FCI DE EJERCICIOS ANTERIORES (OBLIGACIONES A PAGAR)

(En millones de Ptas.)

	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1-1-1990	AUMENTOS/ (BAJAS)	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
FCI. 1989	7.958	-	7.943	15
FCI. 1988	2.379	-	2.032	347
FCI. 1987	791	(1)	704	86
FCI. 1986	588	-	524	64
FCI. 1985 Y ANTERIORES	618	-	403	215
TOTALES	12.334	(1)	11.606	727

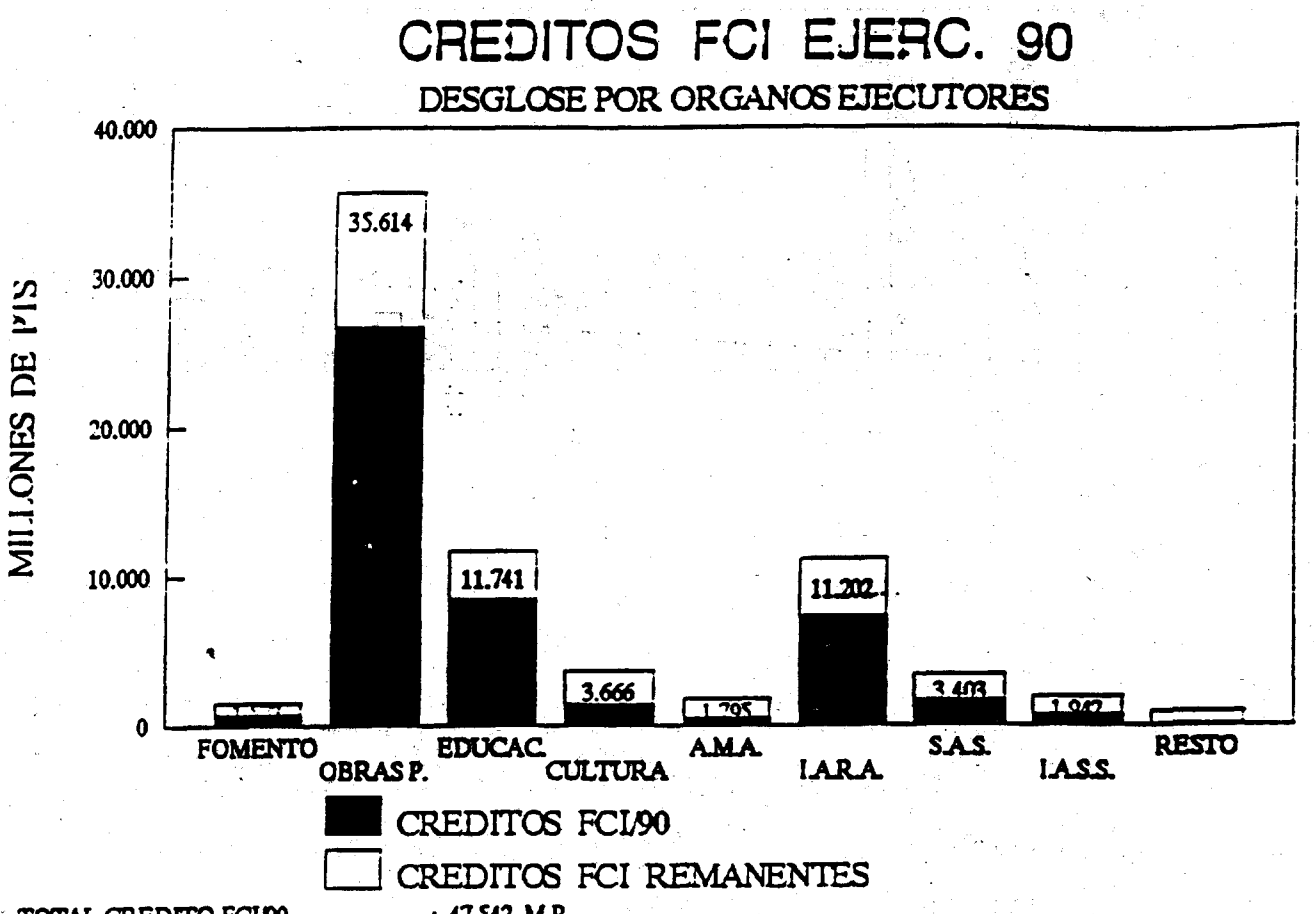
ANEXO VIII

CLASIFICACION POR SECTORES DE LAS RESULTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

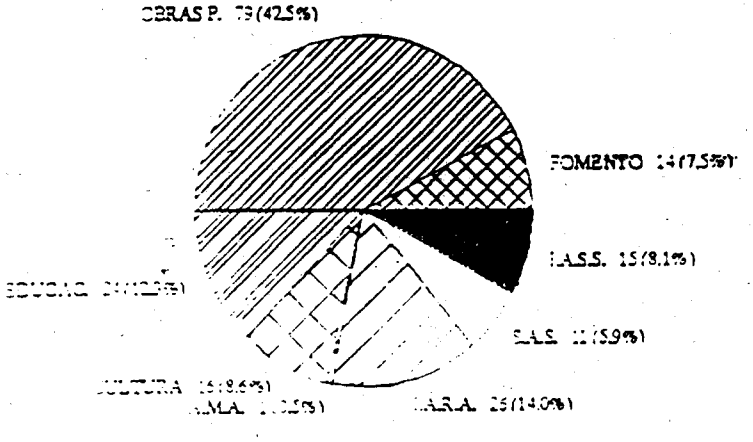
(En millones de Ptas.)

	OBRAS PUBLICAS	AGRICULTURA PESCA Y GANADERIA	VIVIENDA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	SANIDAD	EDUCACION	OTRAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	TOTALES
FCI. 1989	1.905	1.119	849	979	187	773	2.146	7.958
FCI. 1988	128	828	122	431	102	311	457	2.379
FCI. 1987	66	57	35	12	231	201	189	791
FCI. 1986	114	192	3	26	51	51	151	588
FCI. 1985 Y ANTERIORES	22	57	133	2	39	28	337	618
TOTALES	2.235	2.253	1.142	1.450	610	1,364	3.280	12.334

X. GRAFICOS



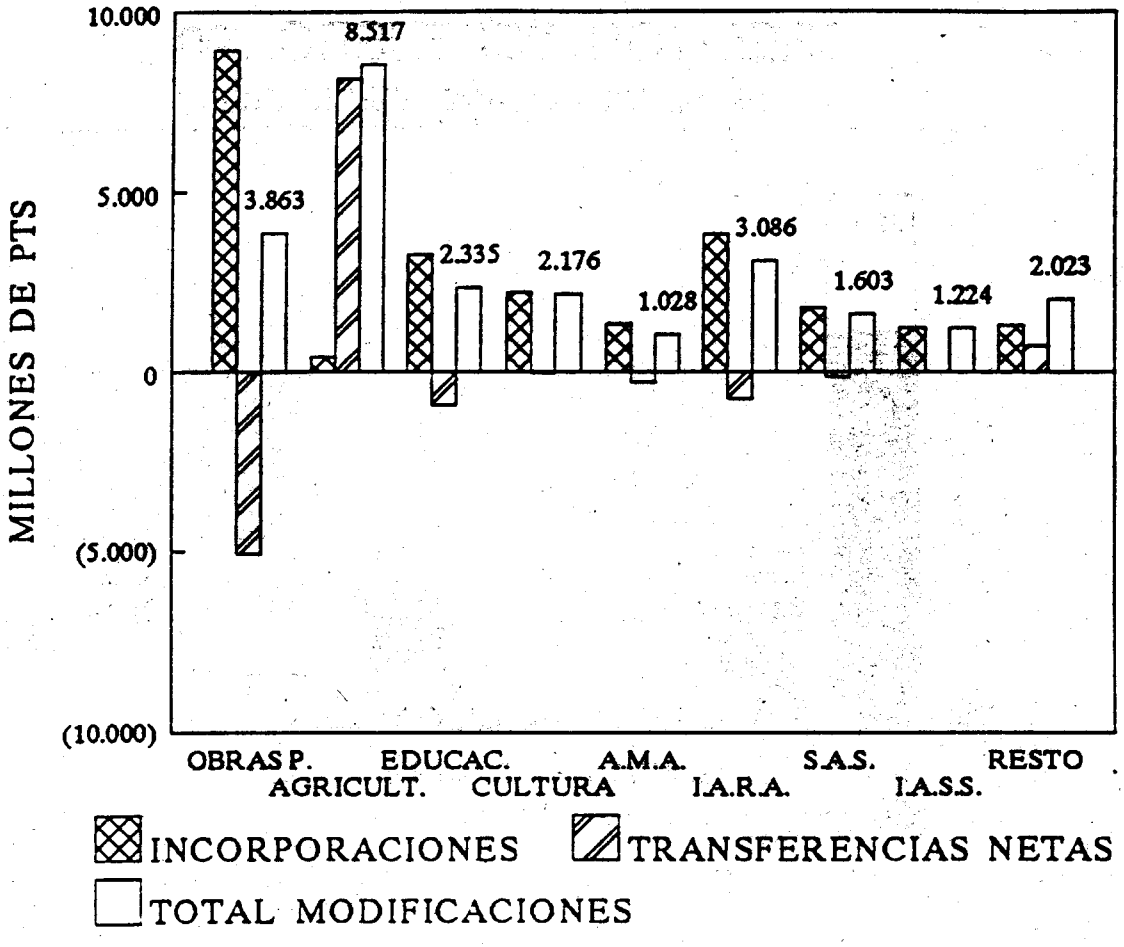
TOTAL CREDITO FCI/90 : 47.542 M.P.
TOTAL CREDITO FCI REMANENTE : 24.270 M.P.



TOTAL PROYECTOS : 184

MODIFICACIONES FCI EJERC. 90

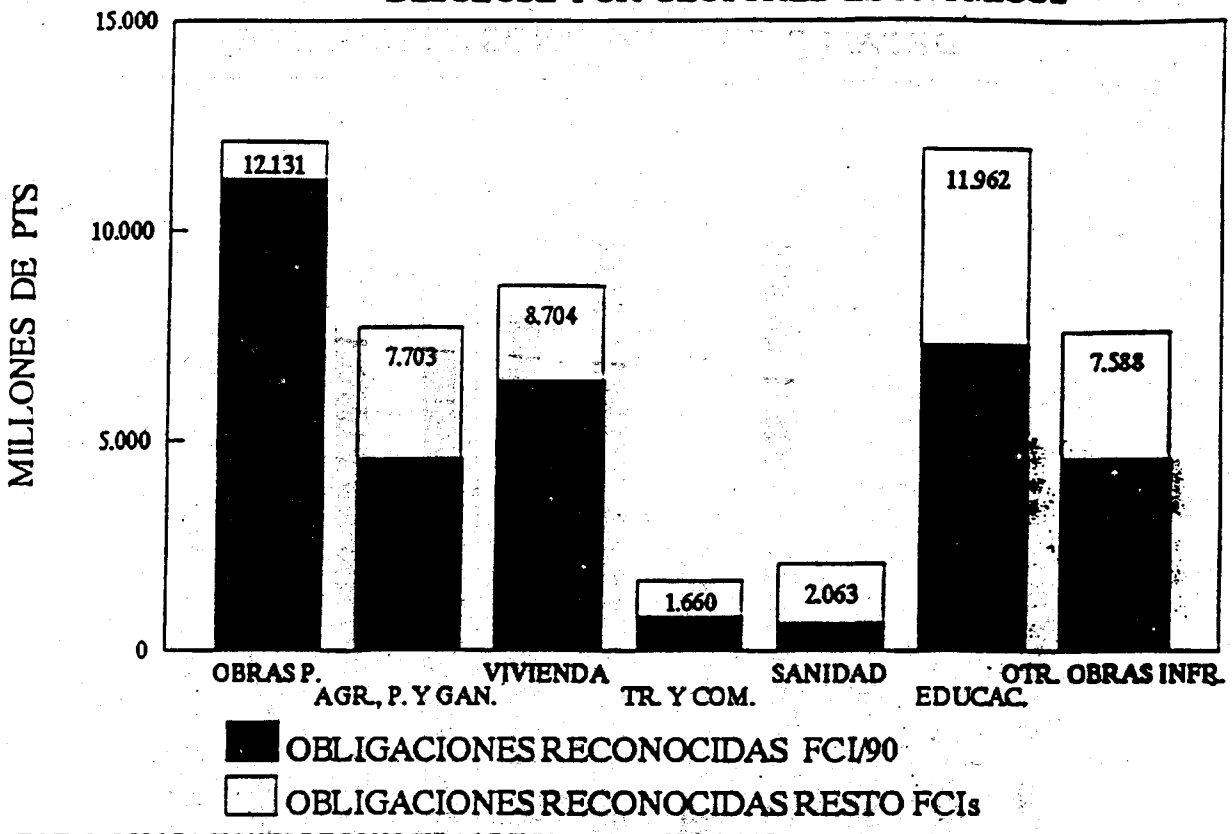
DESGLOSE POR ORGANOS EJECUTORES



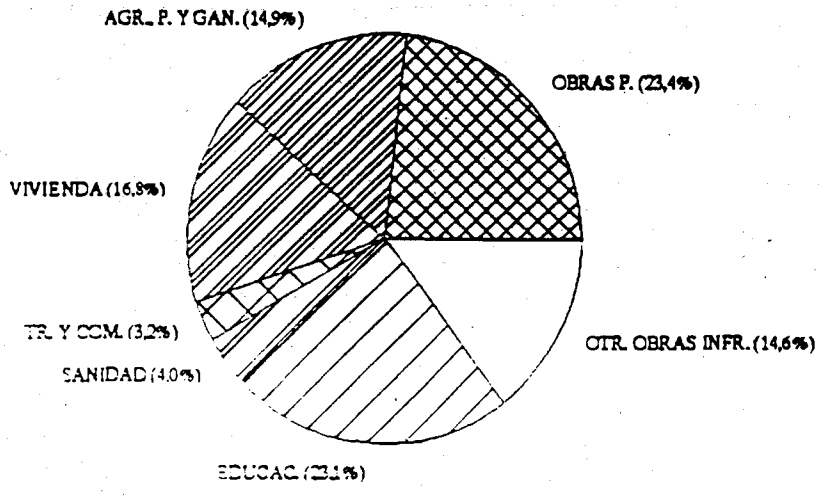
TOTAL MODIFICACIONES : 25.855 M.P.

OBLIGAC. RECONOC. FCI EJERC. 90

DESGLOSE POR SECTORES ECONOMICOS



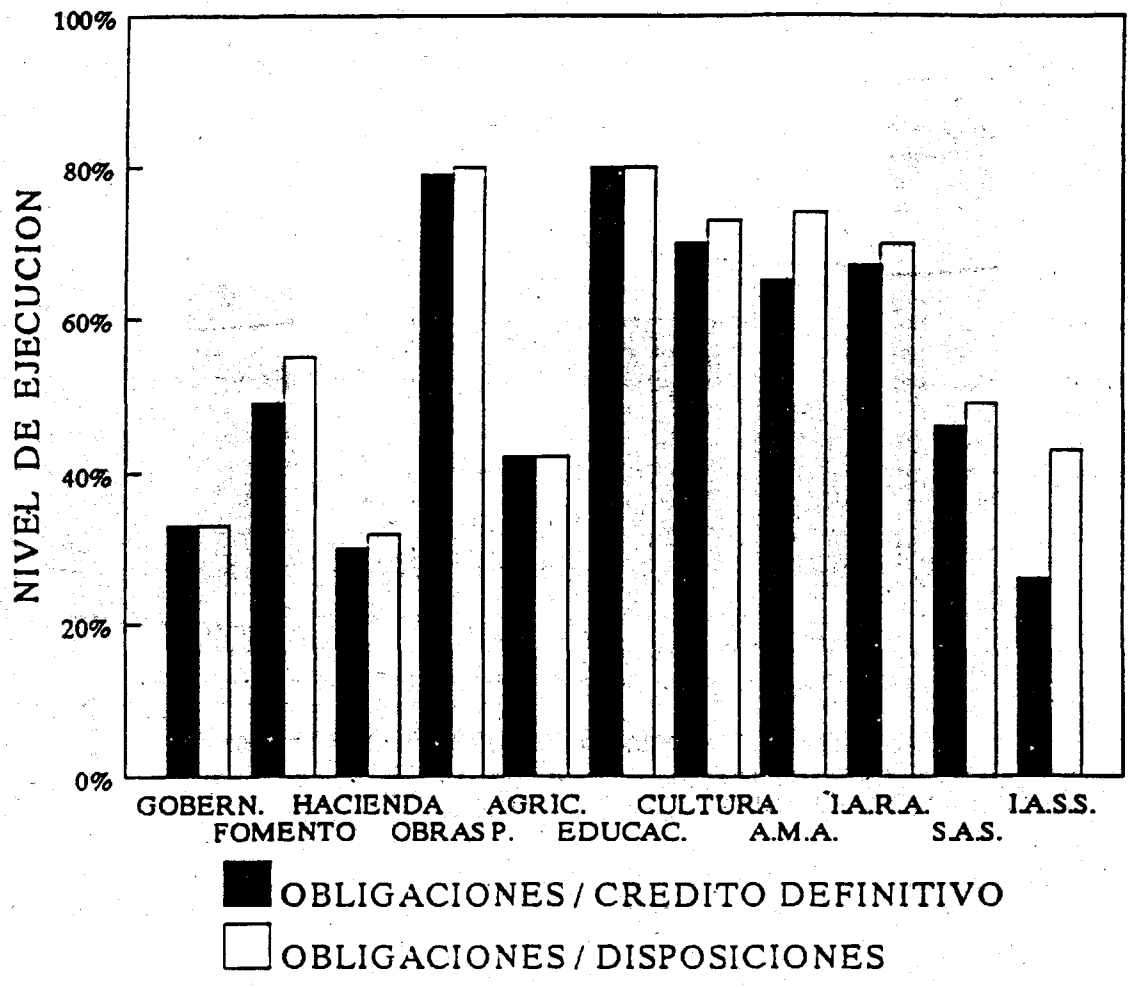
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS FCI/90 : 35.543 M.P.
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESTO FCIs : 16.268 M.P.



TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS FCI EJERCICIO 90 : 51.811 M.P.

GRADOS DE EJECUCION FCI/90

DETALLE POR ORGANOS EJECUTORES



XI. ALEGACIONES NO ACEPTADAS DEL GOBIERNO

ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE LA CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL DURANTE EL EJERCICIO 1990.

ASPECTOS PRELIMINARES.

El presente informe tiene por objeto efectuar las alegaciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma al informe de fiscalización de las operaciones realizadas del Fondo de Compensación Interterritorial en el ejercicio de 1990. Analizaremos y rebatiremos en el caso que se considere necesario las diversas recomendaciones que la Cámara de Cuentas realiza.

En primer lugar, es necesario resaltar el procedimiento más que discutible con que entendemos se han realizado por la Cámara de Cuentas las conciliaciones entre los pagos efectuados por la Administración Central y los cobros contabilizados por la Comunidad Autónoma, limitándose la Cámara simplemente a citar en diversos apartados del informe la existencia de un descuadre de 4.329 M.P., dándole a nuestro juicio una importancia desmedida pues como se analiza posteriormente en la parte de las alegaciones, no asciende a esta cuantía, ni es tal descuadre.

En las alegaciones que presentaremos se acreditará que existe sólamente una escasa diferencia que está pendiente de depurar por parte de la Junta de Andalucía, una vez que remita la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda determinada información solicitada.

También se considera de interés mencionar una vez más, pues en el informe de alegaciones del F.C.I. del ejercicio 1989 ya se puso de manifiesto, la imposibilidad de emitir todas las certificaciones de solicitudes de pago antes del 31 de diciembre, ya que el cierre del ejercicio presupuestario siempre tiene lugar dentro del año siguiente. Esto no incide, por tanto, en el retraso del cobro de los fondos, como se intenta destacar en el informe de la Cámara de Cuentas.

Con respecto a la contratación administrativa, ha resultado satisfactorio advertir que, aún habiéndose detectado observaciones negativas, el número de éstas ha sido escaso. Además, algunas de éstas se han advertido de manera residual, solamente en "algunos de los casos examinados".

Por otra parte, es de destacar como importante limitación al estudio llevado a cabo para la presentación de estas alegaciones, la imprecisión con que la Cámara delimita en su informe el alcance de la contratación administrativa examinada (apartado II del informe), indicando a este respecto únicamente que el análisis se ha ceñido a las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Educación y Ciencia y al Organismo Autónomo I.A.R.A., sin indicar el número porcentual de contratos examinados ni los expedientes concretos a los que afectan las observaciones. Como es lógico, tal imprecisión ha motivado que las alegaciones sean, igualmente, generalizadas.

De otro lado, solamente reseñar que varias de las observaciones manifestadas por la Cámara de Cuentas ya fueron advertidas con carácter general, y en los mismos términos, en el informe emitido sobre contratación administrativa como resultado del análisis de la Cuenta General de 1990. Aunque resulte reiterativo, las alegaciones que se presentarán sobre éstas cuestiones ya se encuentran en parte comprendidas, como es lógico, en las aportadas en su día respecto al citado informe, ya que se corresponden con diferentes interpretaciones de la realidad.

Por último, mencionar que las causas que motivan las alegaciones, en varios supuestos tienen origen en causas no imputables a la Administración Autónoma, por lo que deducimos que la actuación administrativa en materia del F.C.I. se ha desarrollado de manera, cuando menos, aceptable.

1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

- Observación nº 3: La causa justificada para poder incorporar automáticamente los créditos que amparan compromisos de gastos contraidos antes del último mes del ejercicio presupuestario exigida a tenor del art. 40.2,b) de la Ley General de la Hacienda Pública, no consta en los expedientes de incorporación de créditos examinados.

En el caso concreto del F.C.I., que es el que se está considerando, se entiende que por su propia naturaleza los créditos han de incorporarse automáticamente de acuerdo con la Ley General de Hacienda Pública y la Ley del F.C.I., aunque no se justifiquen las causas por las que no pudieron realizarse en el ejercicio anterior.

De esta forma, aún cuando los motivos son muy variados, se da prioridad al carácter automático de la incorporación más que al conocimiento del detalle de las razones habidas para que el proyecto no se haya ejecutado en su totalidad, ya que habiéndose justificado o no, en cualquier caso, ha de incorporarse.

- Observación nº 4: En los expedientes de transferencias cualitativas no queda constancia de que los mismos hayan sido informados por el Comité de Inversiones Públicas del Estado.

Al no citarse por la Cámara los expedientes concretos a los que afectan, no se ha podido comprobar el cumplimiento de la normativa, ya que con carácter general se remiten para someterse al preceptivo informe.

- Observación nº 5: Creación de un nuevo documento contable que plasme las modificaciones de proyectos que no suponen transferencias de crédito.

Con la implantación del Proyecto Júpiter para el ejercicio 1993 está prevista la creación de un documento contable que recoga este tipo de modificaciones de proyectos, que tienen lugar a nivel inferior al concepto presupuestario, reservandose el documento "T" para las transferencias de créditos.

2. CONTRATACION ADMINISTRATIVA.

Las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Cámara sobre esta materia se contienen en el apartado IV.2 de su informe, las cuales se exponen con mayor amplitud en el epígrafe VII.3.

- Observación nº 6. Inexistencia de una mínima correlación entre el programa de desarrollo de los trabajos preceptuado en el artículo 22.b) de la L.C.E. y las anualidades asignadas a cada proyecto de inversión.

Esta observación se considera ha sido emitida por la Cámara de manera excesivamente generalizada pues es norma general en la contratación administrativa que la distribución de los créditos entre las distintas anualidades de ejecución de las obras se fundamente en los correspondientes programas de trabajo, no pudiéndose constatar, por otra

parte. Los casos en que la Cámara de Cuentas ha advertido que se procede de forma distinta. No obstante, no han de olvidarse dos aspectos a tener en cuenta:

a) Tal y como se establece en el citado artículo 22, los programas de trabajo tienen únicamente carácter indicativo.

b) No siempre ha de existir una estricta correlación entre los importes de los créditos asignados a la ejecución de las prestaciones objeto de los respectivos contratos y los plazos en que se prevé su realización. Es por ello por lo que la contracción de las correspondientes obligaciones de la Administración ha de efectuarse de acuerdo con el contenido concreto de las prestaciones que se realicen en cada momento, con independencia de que las mismas se distribuyan o no uniformemente a lo largo del periodo global de realización del contrato.

- Observación nº 7: En la mayoría de los expedientes analizados los contratos se adjudican en los últimos meses del ejercicio 1990, e incluso algunos de ellos en los primeros de 1991, y no se acredita en los expedientes ninguno de los supuestos excepcionales que el art. 20 de la L.C.E. contempla.

Se desconoce los expedientes analizados por la Cámara para concluir la observación que nos ocupa, aunque se puede afirmar que el grado de representatividad de éstos con respecto al volúmen total de contratos formalizados en el ejercicio 1990 con recursos procedentes del F.C.I. es muy escaso. A esta conclusión se llega claramente si se observa el gráfico que se adjunta como Anexo I, en donde se comparan los montantes del crédito definitivo del Capítulo VI del referido Fondo, en las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y Educación y Ciencia, con los correspondientes a los créditos comprometidos en los mismos Departamentos a finales de junio de 1990. Así, en la primera de las dos Consejerías citadas se había dispuesto a esta fecha de un 87 por 100 del crédito definitivo, y en la segunda de un 76 por 100, datos éstos que reflejan claramente que el montante más importante de los contratos se adjudicó en el trancurso del primer semestre del ejercicio. Es por ello, por lo que la Cámara debiera reconsiderar la conveniencia de incluir esta observación en su informe definitivo, ya que, como se puede observar, carece de fundamento.

No obstante, hay que indicar que, en los supuestos en que la adjudicación se produzca en un momento posterior, no siempre habrá de acreditarse la causa del retraso de forma expresa en el expediente, pues la legislación de contratos permite que la misma se deduzca de los planes o programas correspondientes, hecho éste que desconocemos si ha sido objeto de comprobación.

Además, quizá esta observación pudiera deberse a que los expedientes no han sido examinados en todas sus fases de tramitación.

Como puede observarse, apuntamos posibles causas explicatorias de esta observación, y decimos "posibles" porque, como ya se indicó, la Cámara no llega a formular referencias concretas sobre los expedientes en que puedan concurrir las circunstancias que nos ocupan.

En la página 15 del informe, también en relación al procedimiento contractual, se efectúan, además, las siguientes observaciones:

La Cámara de Cuentas manifiesta que la Consejería de Educación y Ciencia emplea la contratación directa en la totalidad de los expedientes examinados.

Esto no puede ser de otra manera, si se tiene en cuenta que del total de expedientes de contratación formalizados por esta Consejería con cargo a recursos procedentes del Fondo, la Cámara únicamente solicitó para su examen los expedientes en los cuales se había empleado este sistema de adjudicación, por lo que a todas luces, los contratos analizados responden necesariamente a esta característica. Por ello, no se considera en absoluto procedente esta observación, puesto que de la misma podría erróneamente deducirse que la contratación directa es la norma, y no la excepción.

No obstante, a este respecto se indica, como ya se manifestó en las alegaciones presentadas con respecto al informe provisional resultado del análisis de la Cuenta General de 1990, que todos los expedientes tramitados en el ejercicio de referencia por contratación directa en la Consejería que nos ocupa tienen incorporada una Resolución motivada del órgano competente que justifica la adopción de tal sistema de adjudicación.

En cuanto al hecho destacado por la Cámara de que la formalización de los contratos se efectúe por término medio en 34 días desde la adjudicación definitiva, la desviación que este dato pone de manifiesto se considera irrelevante, habida cuenta del plazo establecido a estos efectos en la legislación de contratos (30 días).

- Observación nº 8: Los retrasos constatados en la adjudicación de los contratos han dado lugar a que el inicio de la ejecución, en algunos de los casos examinados, no tenga lugar hasta el ejercicio 1991, produciéndose incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria en el que se inspira el art. 41 de la L.G.H.P. y no practicándose el reajuste de anualidades que de dicha situación se derivaría.

Con respecto a esta observación hay que indicar lo siguiente:

Aun cuando el artículo 41 de la L.G.H.P. sienta las bases de la limitación temporal a que está sometida la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía (el principio de anualidad presupuestaria se refleja en el art. 31 del mismo texto legal), tampoco hay que olvidar el régimen de incorporación de remanentes comprometidos vigente en el ejercicio 1990.

No obstante, al indicar la Cámara "en alguno de los casos examinados", sin especificar nada más a este respecto, no se conoce ni el número ni el tipo de expedientes en los que se ha advertido, siendo, por tanto, imposible analizar cada supuesto concreto.

- Observación nº 9: Se advierte una baja ejecución durante el ejercicio. Dicha situación tiene como consecuencia que la ejecución real no se acomode a la anualidad dotada para el mismo, sin que se haya apreciado la instrumentación de los trámites preceptuados en el artículo 152 del R.C.E.

No se comparte la apreciación efectuada a este respecto, y ello porque los datos extraídos de la Cuenta General del ejercicio 1990 correspondientes al Servicio 19 muestran unos porcentajes de ejecución sensiblemente superiores a los expuestos por la Cámara. (Se adjunta gráfico explicativo en el Anexo II de este informe). Así, comparando el montante de obligaciones reconocidas con el correspondiente a los créditos definitivos del mencionado servicio, se obtienen los siguientes porcentajes de ejecución:

- Consejería de Obras Públicas y Transportes: 85%.
- Consejería de Educación y Ciencia: 76%.
- Instituto Andaluz de Reforma Agraria: 62%

Es por ello por lo que se recomienda a la Cámara reconsidere los datos plasmados de su informe y los sustituya por los correctos, pues, sin duda, habrá debido cometerse algún tipo de error en su cálculo.

- Observación nº 10: En las certificaciones de obra expedidas sin acreditar ejecución, no se justifican las causas que motivan dicha circunstancia.

A este respecto hay que indicar en primer lugar que, como bien dice la Cámara en la página 28 del informe, en la Administración Autonómica se respeta siempre lo establecido en el Real Decreto 1881/84 de 30 de agosto, y en la Orden de 5 de diciembre de 1984, del Ministerio de Economía y Hacienda, que desarrolla el anterior, ya que las certificaciones se expiden incluso en los periodos en que no se acredita ejecución de obra.

Por otro lado, los casos en los que se expiden certificaciones de obras a cero son muy puntuales y, en consecuencia, se considera improcedente inducir a partir de ellos pautas de actuación administrativa, al ser una excepción con respecto a la regla general.

- Observación nº 11: Los retrasos constatados en el pago de certificaciones de obra hacen que exista el riesgo de exigencia, por parte del contratista, del interés de demora e incluso la posible suspensión temporal de las obras, con lo que ello supondría para el coste total de la obra y el plazo de ejecución de la misma.

En relación a esta cuestión hay que indicar que, aun a sabiendas de la existencia de ciertos retrasos en el pago de las certificaciones de obra, no se puede olvidar que ello se encuentra íntimamente relacionado con la demora que se produce en el cobro de los recursos del F.C.I., demora en modo alguno imputable a la Administración Autonómica.

Aun existiendo la posibilidad de que el contratista exija el abono de los intereses de demora correspondientes, la Cámara no ha dejado de comprobar que este requerimiento nunca se produce.

- Observación nº 12: Respecto a la liquidación provisional de la obra, se constata incumplimiento de los plazos legales tanto en el levantamiento del acta de recepción como en la elaboración del proyecto de liquidación y pago de la correspondiente certificación.

Los procedimientos de recepción provisional y liquidación de las obras conllevan una serie de negociaciones entre las partes contratantes que, en determinados supuestos, hacen demorar los plazos legalmente establecidos. Las causas de estas demoras son imputables, en consecuencia, tanto a la Administración como al contratista. Prueba de que esta afirmación es cierta es el hecho de que los contratistas no solicitan en ningún caso el abono de los intereses de demora correspondientes.

- Observación nº 13: Entre las causas que motivan los reformados del contrato primitivo se advierte con cierta frecuencia la incorrección o la falta de previsión existente a la hora de la redacción del proyecto.

Sobre esta observación, en la que la Cámara abunda en mayor medida en las páginas 30 y siguientes de su informe, cabe realizar las siguientes alegaciones.

Las causas que la Cámara ha advertido como justificativas de la tramitación de modificados son las siguientes:

- sustitución de elementos del proyecto original
- Adiciones o supresiones de los mismos
- Reposiciones por destrozos o daños
- Rediseño o adaptaciones de estructura

Se considera que sin un análisis más profundo de las mismas no se puede concluir que haya existido incorrección o falta de previsión en la redacción de los proyectos, afirmación ésta que la Cámara habría debido argumentar de una manera más detallada. Aun menos puede deducirse de lo expuesto el incorrecto desempeño de sus funciones por las Oficinas de Supervisión de Proyectos, observación totalmente gratuita y carente de fundamento, máxime si se tiene en cuenta que en los informes que realizan sobre los modificados se justifica la imposibilidad de previsión de las causas al tiempo de elaborar los proyectos primitivos.

- Observación nº 14: Igualmente, se pone de manifiesto los retrasos que, sobre la ejecución, ocasiona la dilación en el tiempo de los trámites necesarios para la aprobación de los reformados.

Los retrasos que se originan por causa de los modificados son de todo punto lógicos y necesarios si se piensa que la tramitación del expediente ha de discurrir por los cauces marcados en la legalidad vigente y, desde luego, no ha de suponer siempre una suspensión temporal de la ejecución de las obras, en contra de lo que la Cámara parece dar a entender.

3. FINANCIACION DE PROYECTOS DEL F.C.I.

A. RECOMENDACIONES.

- Observación nº 15: Se pone de manifiesto la tardanza en el cobro de los fondos, derivada de un retraso en la solicitud de los Fondos a la Administración Central.

En relación con la agilización de las peticiones de fondos a la Administración Central, hay que matizar que actualmente se certifica con una periodicidad de 15 a 30 días, no siendo imputable a esta Comunidad la tardanza con que posteriormente se reciben los fondos.

- Observación nº 16: Se citan las debilidades del sistema de control sobre el F.C.I. utilizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, recomendando la implantación de un sistema informatizado, y de unos adecuados sistemas de supervisión que eviten aquellos fallos que conducen a que la Administración Central rechace certificaciones.

Como ya se citó en el informe del ejercicio anterior y en el apartado VIII.4 de éste, existe un gran interés por implantar la informatización del control del F.C.I. pero conviene aclarar que en el caso de que existiera algún fallo, la Administración Central no rechaza las certificaciones, sino que procede a reajustar los importes solicitados, remitiéndonos el importe líquido. Una vez conocido el importe líquido, regularizamos de acuerdo con la documentación que se recibe, no existiendo por tanto ningún retraso en el cobro de los fondos.

Con repecto a las conciliaciones entre los importes cobrados por la Comunidad Autónoma y los pagados por la Administración Central, reseñar que se analiza en el apartado VIII.3 del informe.

B. DERECHOS ANULADOS.

En este apartado se hace referencia a los Derechos anulados durante el ejercicio 1990, que ascienden a 2.672 M.P., de los cuales 2.292 M.P. se refieren a un error de imputación, pues se contabilizaron como Derechos reconocidos en el citado ejercicio, cuando se habían contabilizado ya en el ejercicio anterior, por lo que se procedió a su anulación.

El resto de 378 M.P. se corresponden a 3 anulaciones de los importes siguientes:

- 14.153.739 ptas correspondientes al FCI/90.
- 363.566.761 ptas correspondientes al FCI/88.
- 160.001 ptas correspondientes al FCI/86.

Con esto queremos hacer hincapié en que aunque se produzcan anulaciones, no son tan elevadas como para mencionar en varios apartados

del informe la debilidad del sistema, pues hay que reconocer que algún error siempre se puede producir, aunque el seguimiento se haga informáticamente; errores que además no afectan ni a lo cobros ni a los pagos.

C. PERCEPCION DE INGRESOS DEL FONDO.

Alegación aceptada

Posteriormente se menciona la diferencia existente entre los pagos efectuados por la Administración Central y los importes contabilizados por la Comunidad Autónoma como cobrados correspondientes a los FCI/86, FCI/87, FCI/88 y FCI/89.

Para determinar los ingresos, según se desprende del informe, la Cámara ha utilizado las Liquidaciones de los Presupuestos de los años citados, pero para los pagos no se cita qué documentación se ha analizado, debiendose tener en cuenta en primer lugar si ésta es lo suficientemente detallada y completa.

El importe fundamental que se encuentra comprendido en los 4.329 Millones citados es uno de 4.032 M.P. del F.C.I. 86. En cuanto al resto, se está a la espera de recibir información del Ministerio de Economía y Hacienda del desglose de los pagos del Ejercicio 86 y 87.

Independientemente de que esta última depuración se efectue, los 4.032 M.P. referidos al FCI/86, citados también en el apartado VIII.4 del informe, están localizados en la propuesta de pago de fecha 1-4-87 por importe de 3.209 M.P.

Esta propuesta de pago se corresponde con una petición de fondos de 7.242.141.720 ptas, de las que se descuentan 4.032.498.121 ptas, quedando un importe liquido de 3.209.643.599 ptas, que se contabilizan mediante mandamiento de ingreso nº 2296 de fecha 10-7-87. Este descuento se produce para ajustar el importe del anticipo entregado a la Comunidad Autónoma al 25 % del FCI actual.

La operación que se realizó al recibir este documento, mediante comunicación de la Intervención General a la Intervención Delegada de Tesorería de fecha 17 de septiembre de 1987, consistió en anular los Derechos reconocidos correspondientes a los 4.032.498.121 ptas.

Para reflejar contablemente con más detalle este descuento, entendemos que se podría haber realizado un m/p en formalización en "Devoluciones" compensado con un m/i en formalización en "Recaudado" por el mismo importe, desapareciendo con ello el descuadre de los 4.032 M.P.: operación que por otra parte no consideramos necesaria por deducirse de la información incluida en el CK citado.

No entendemos como se afirma que dicha cantidad no se ha contabilizado como "Derechos reconocidos", cuando existen dos operaciones contables que lo sustentan, un contraido previo, de fecha 10 y 27 de febrero de 1987, cuando se realiza la petición de fondos a la Administración Central, y la anulación posterior, de fecha 17 de septiembre del mismo año.

De todo ello, concluimos que las conciliaciones realizadas no se han efectuado con el rigor suficiente, ya que las operaciones citadas anteriormente se desprenden claramente de la documentación utilizada por la Cámara de Cuentas.

Después de esta aclaración, quedarían por depurar 297 M.P. que, como hemos dicho anteriormente, están pendientes de la remisión por parte de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales de la información solicitada.

También se afirma que esta cuantía tampoco ha sido contabilizada como "Derechos reconocidos".

En contra de esta afirmación, hay que indicar que de la contabilidad llevada en el servicio que gestiona el FCI se desprende claramente que todas las certificaciones expedidas y remitidas a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales para el envío de fondos dan lugar al correspondiente contraido previo por el importe total.

En este mismo apartado se menciona por la Cámara el contraste existente entre los importes recaudados por certificaciones emitidas durante el ejercicio 1990 y los pagos realizados por proyectos ejecutados durante el mismo periodo.

Se afirma que esta situación es debida al desfase existente entre la emisión de la certificación y la transferencia de fondos, demora que como ya se alegó en el informe del año anterior, es imputable a la Administración Central, y no a la Comunidad Autónoma.

Otra causa citada es el retraso constatado en los distintos centros gestores para la adjudicación de los contratos y en la elaboración de las liquidaciones de proyectos. Sin embargo, entendemos que ello no afecta a la demora existente en el cobro de los fondos, ya que también se retrasa la totalidad de los trámites que componen el proceso, tanto de ingresos como de pagos.

En el último párrafo se menciona que un 10 % de las certificaciones emitidas en 1990 se corresponden con obligaciones contraidas en ejercicios anteriores a 1990 y que, por tanto, podrían haberse certificado en los años en que se contrajeron las obligaciones, habiendose contribuido por ello al retraso en el cobro de los fondos.

Analizadas las certificaciones emitidas en 1990, observamos que todas corresponden a obligaciones del ejercicio corriente, excepto las que se refieren al cierre del ejercicio presupuestario del año anterior, y en ningún caso de "ejercicios anteriores".

Como se alegó en el informe del año anterior, y se vuelve a insistir en otro apartado de este, el cierre del ejercicio presupuestario no se produce a 31 de diciembre, sino dentro del ejercicio siguiente, por lo que a primeros de año se expiden las certificaciones correspondientes al total contabilizado en esa fecha, procediendose al reajuste final una vez que se aprueba la liquidación del Presupuesto.

Se dice que ello ha contribuido al retraso en el cobro de los fondos, lo cual no es cierto, ya que es evidente la imposibilidad de certificar con anterioridad.

D. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO.

Se cita en el informe que el sistema de control llevado a cabo durante el ejercicio 1990 no ha variado en forma sustancial del seguido en el ejercicio 1989, pues la llevanza del mismo se sigue haciendo manualmente

Como ya se alegó en el informe del ejercicio 1989, pensamos que el sistema utilizado es completo, aportando la información necesaria, a pesar de reconocer las deficiencias intrínsecas que conlleva cualquier control manual.

Igualmente se hizo constar en las alegaciones del año anterior la intención de este Centro Directivo de proceder a su informatización, estando en estudio la elaboración de un Análisis Funcional adecuado a la nueva normativa, con el fin de conseguir un control más exhaustivo.

Con respecto a que la Intervención General no efectúa conciliaciones entre los pagos efectuados por la Administración Central y los cobros contabilizados por la Comunidad Autónoma, no nos deja de sorprender esta afirmación, ya que, como se puede comprobar documentalmente, no se contabiliza ningún ingreso correspondiente al FCI sin que la Intervención General previamente lo conozca, efectuandose, además, comprobaciones periódicas de los ingresos con la Intervención Delegada de Tesorería, así como de las certificaciones pendientes de pago por parte de la Administración Central.

El supuesto descuadre de 4.329 M.P., queda desarrollado en el apartado VIII.3 del informe, y la escasa diferencia que se mantiene, como se ha citado, habría que depurarla constatandola en base a una información detallada y completa de la que aún no se dispone, y que la Cámara de Cuentas tampoco ha podido conseguir.

Indica la Cámara que al cierre del ejercicio presupuestario no se calculan los saldos pendientes de certificar de cada uno de los proyectos, teniendo lugar dicho cálculo una vez iniciado el siguiente ejercicio presupuestario.

Como ya se manifestó en el informe del ejercicio 1989, los saldos pendientes de certificar de cada uno de los proyectos no se pueden calcular al cierre del ejercicio presupuestario, pues evidentemente la liquidación del Presupuesto no puede estar culminada a 31 de Diciembre. La forma de proceder, como ya se ha afirmado, creemos que es la correcta, es que una vez culminada la Liquidación del Presupuesto se compruebe con el total de certificaciones emitidas, para proceder a realizar las rectificaciones oportunas a que hubiere lugar.

Por último, se menciona el rechazo de certificaciones por la Administración Central al sobrepasar el crédito asignado al proyecto en concepto del FCI, por no haber tenido en cuenta la cofinanciación de los proyectos FCI/FEDER. Esto se produce a lo largo de todo el año en una sola ocasión por desconocerse en el momento de realizar las certificaciones dicha cofinanciación.

XII. REPLICA A LAS ALEGACIONES NO ACEPTADAS

REPLICA A LAS ALEGACIONES AL INFORME SOBRE EL FCI/90

ASPECTOS PRELIMINARES

En cuanto a los aspectos tratados en este apartado de las alegaciones serán objeto de réplica en los puntos siguientes. Merece hacer constar que el Informe sobre el FCI/90 pretende dar una visión global acerca de la gestión de este Fondo sin limitarse a la consideración de casos concretos.

Por otro lado, frente a la imprecisión con la que la IGJA califica el alcance de la contratación administrativa examinada, ha de indicarse, que en la página 24 del Informe sobre el FCI/90, se hace referencia en términos absolutos, al número de contratos adjudicados en el ejercicio 1990 y examinados en cada una de las Consejerías y Organismo Autónomo seleccionados. En términos relativos no ha podido determinarse puesto que la información sobre los contratos adjudicados con cargo al FCI/90, por las distintas Consejerías y OO.AA., no se estima suficiente y fiable.

1.- Modificaciones Presupuestarias

- **Observación nº 3**

Esta Cámara se ratifica, a pesar de las alegaciones formuladas, en el criterio de que debe incluirse en el expediente de incorporación, la causa de la no ejecución de los créditos en el ejercicio anterior, tal como preceptúa el artículo 40.2 b) de la LGHP.

Por otro lado, la prioridad aducida por la IGJA no parece tal, cuando como se pone de manifiesto en la observación nº2 del Informe sobre el FCI/90 (pág. 10), se han anulado créditos por importe de 66 M.P., que podrían haberse incorporado automáticamente.

Este aspecto de las incorporaciones de crédito (art. 40.2 b) fue objeto de alegación en el Informe de la Cuenta General, relativo al ejercicio 1990. En este, se puso de manifiesto que el criterio de la IGJA era el considerar solo aplicable, la necesidad de justificar, a las incorporaciones de crédito corriente. Ello deja traslucir la diversidad de criterios que, para un mismo tema, mantiene la IGJA.

- **Observación nº 4**

En la pág. 22 del Informe sobre el FCI/90 se indica que son tres los expedientes cualitativos de los 14 tramitados, así como las causas por las cuales se han modificado los proyectos. Por tanto, no debe aducirse por la IGJA, como causa para no comprobación, la no citación de los expedientes, ya que bastaría con analizar los 14 expedientes de los que la IGJA debe guardar copia, puesto que han de ser informados preceptivamente por ellos.

2.- Contratación Administrativa

- **Observación nº 6**

En los expedientes examinados no existe una mínima correlación entre los programas y las anualidades, ni siquiera de carácter indicativo. El término "mínima" se distancia bastante del término "estricta" empleado por la IGJA.

Por otro lado, el presupuesto ha de considerarse como un instrumento de gestión, y como tal los créditos consignados en él deben ser ejecutados en el período anual de vigencia del mismo.

- **Observación nº 7**

La conclusión, y por tanto la consiguiente recomendación expuesta en este punto (pág. 11 del Informe sobre el FCI/90), deriva del examen de los expedientes de contratación seleccionados; lógicamente, a esa misma conclusión no llega la IGJA, comparando los créditos dispuestos con los definitivos (Anexo I).

Ello se debe a que la IGJA al examinar el servicio 19 no tiene en cuenta que el mismo se compone de:

- Créditos comprometidos en ejercicios anteriores con cargo a 1990, es decir, "anualidad futura" (contratos plurianuales adjudicados en años anteriores a 1990).

- Créditos comprometidos de proyectos nacidos en 1990 adjudicados en el citado ejercicio.

Esta Cámara de Cuentas se refiere a este segundo grupo y considera que el pretender un análisis globalizado del servicio 19 induce al error que la IGJA plasma en la alegación.

Los supuestos excepcionales, a los que se hace referencia en la observación nº 7, contemplan dos puntos:

1.- que se deduzca de los planes y programas correspondientes (hecho al que se refiere la alegación), y
2.- concurrencia de circunstancias justificadas que aconsejen demorar la tramitación.

En cuanto a la afirmación de que los expedientes no han sido examinados en todas sus fases de tramitación, se considera totalmente gratuita. En la pág. 23 del Informe sobre el FCI/90, se especifica cual ha sido el alcance de la fiscalización en materia de contratación administrativa.

La propia Consejería de Educación y Ciencia proporcionó un listado de contratos adjudicados en el ejercicio 1990, de los cuales solo 7 no fueron adjudicados por contratación directa y tampoco financiados con cargo a recursos del FCI. Por otro lado, el criterio para la selección de la muestra fue los de importe superior a 25 M.P. y no el sistema de adjudicación empleado, como parece aducir la IGJA.

En cuanto al tiempo medio para la formalización de los contratos, la Cámara solo constata que es de 34 días. Al no considerarlo relevante esta Cámara no incluye conclusión ni recomendación al respecto, aunque se insiste que la media es superior al plazo máximo establecido en la normativa legal, que es de 30 días.

- **Observación nº 8**

El régimen de incorporación de remanentes comprometidos no justifica el que la ejecución de las inversiones se inicie en el año siguiente a la adjudicación del contrato; no solo se incumple el art. 41, sino también el art. 39 de la LGHP, en lo que a los expedientes de contratación plurianuales se refiere.

- **Observación nº 9**

Esta Cámara de Cuentas no ha calculado erróneamente los porcentajes de ejecución real de las Consejeríasy Organismo Autónomo, objeto de examen. Los tantos por ciento señalados en la pág. 27 del Informe sobre el FCI/90 corresponden a la comparación de las Obligaciones Reconocidas con los Créditos Comprometidos de los contratos adjudicados en 1990 y que han sido objeto de examen. La IGJA al ofrecer estos porcentajes (Anexo II) compara el total de Obligaciones Reconocidas con los Créditos Definitivos del Servicio 19. Como expusimos en la observación nº 7, el pretender un análisis globalizado del Servicio 19 induce al error que la IGJA plasma en la alegación.

- **Observación nº 10**

Esta Cámara de Cuentas mantiene que, aún cuando se tratara de casos puntuales, circunstancia esta que no se aprecia en los expedientes analizados, deben explicarse las causas que motivan la expedición de una certificación sin acreditar ejecución, tal como señala el Real Decreto 1881/84 y la Orden de 5 de diciembre de 1984 del Ministerio de Economía y Hacienda

No se trata de inducir pautas de actuación administrativa, sino al cumplimiento de un R.D. y una Orden.

- **Observaciones nºs 11 y 12**

Ante los riesgos de la posible exigencia de intereses de demora por parte de los contratistas, esta Cámara insiste en la obligación de la Administración de evitar dichos riesgos.

- **Observación nº 13**

Han sido objeto de examen los informes de la Oficina de Supervisión no encontrándose justificación de los modificados en los mismos.

Al efecto se hace constar que tales informes se expresan en un modelo tipo con un texto similar en los expedientes analizados.

3. Financiación de proyectos del FCI

A. RECOMENDACIONES

- **Observación nº 16**

En la página 36 del Informe sobre el FCI/90 se pone de manifiesto que, efectivamente, han sido rechazadas certificaciones.

B. DERECHOS ANULADOS

El hecho de ser mencionados en varios apartados, se deriva de ser consideradas, a juicio de la Cámara, una debilidad en el sistema de control del FCI, debilidad que queda perfectamente clara al leerse las causas que provocan la anulación (pág. 36 del Informe sobre el FCI/90).

C. PERCEPCION DE INGRESOS DEL FONDO

En cuanto a las conciliaciones entre los pagos del Estado y los cobros por la Comunidad Autónoma por conceptos del FCI, esta Cámara estudiadas las alegaciones formuladas por la IGJA expone:

La conciliación no ha sido realizada con falta de rigor, tal como aduce la IGJA:

- Las conclusiones expuestas están lo suficientemente soportadas. La información utilizada han sido las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de los ejercicios 1986 y siguientes, así como unos listados que periódicamente envía la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales; estos últimos fueron suministrados por la IGJA, extrañando a esta Cámara, que por la misma se estimen poco detallados e incompletos.

- Como claramente se recoge en el Informe sobre el FCI/90 (pág. 37), los pagos por conceptos del FCI/90 ascendieron a 166.248 M.P., mientras que los ingresos contabilizados por la Comunidad y reflejados en las Cuentas Generales por los mismos conceptos, ascendieron a 161.919 M.P. De la diferencia entre ambas partidas resulta el descuadre de 4.329 M.P.

No cuestionamos la contabilidad auxiliar que lleva el servicio que gestiona el FCI, ahora bien, ésta ha de verter la información a la Cuenta General y en la misma no aparecen ni como reconocidos, ni como recaudados por concepto del FCI los 4.329 M.P.

En cuanto al contraste de los importes pagados y cobrados en conceptos de FCI, conviene indicar:

1º La primera causa aducida es imputable a la Administración Central y, por ello, se ha recomendado que se apremie a la misma para la agilización de las resoluciones de petición.

2º Si se le da una breve lectura a la Ley 29/90 del FCI, el primer 25% del FCI no se recibirá hasta que no se adjudiquen los proyectos; por tanto, la incidencia sobre el cobro de un retraso en la adjudicación es directa.

3º En cuanto al 10% de las certificaciones, en esta Cámara de Cuentas obran fotocopias de aquellas obligaciones contraídas en "ejercicios anteriores" a 1990, y no sólo son del ejercicio 1989, sino también del 1988. No se entiende "la imposibilidad de certificar con anterioridad".

D. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

- En contra a la afirmación de la IGJA sobre que el sistema de control es "completo", esta Cámara no puede estar de acuerdo, puesto que el citado sistema no aporta una información necesaria y fidedigna.

- No se efectúan conciliaciones. Esta Cámara no se refiere a conciliación con la Intervención Delegada de Tesorería, sino con la Administración Central. La prueba de ello, como se indica en la pág. 37 del Informe sobre el FCI/90, es el descuadre de 4.329 M.P. que arrastra desde 1986.

- El procedimiento mencionado en el penúltimo párrafo de las alegaciones sería correcto, pero como dichos saldos pendientes de certificar no se calculan antes de iniciarse el procedimiento de certificación para el siguiente ejercicio, dicha situación provoca anulación de certificaciones. Véase causas de anulación en las págs. 35 y 36 del Informe sobre el FCI/90.

- El carácter de cofinanciación de un proyecto, así como su importe, es conocido al inicio de la vida del proyecto. No se entiende, por tanto, que la IGJA afirme en su último párrafo de las Alegaciones, el desconocimiento de dicha condición, al margen de que se trate de un solo caso o más.

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas, en ejercicio de la función fiscalizadora establecida en los artículos 1 y 5 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Cuentas, a tenor de los artículos 7.b), 11.1 y 17.f) de ese texto legal, y de los artículos concordantes del Reglamento de Régimen Interior de la propia Sindicatura de Cuentas en relación con el artículo 9.2 de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial,

HA ACORDADO por unanimidad, en reunión celebrada el 9 de septiembre de 1992, aprobar y elevar

A LAS CORTES VALENCIANAS

este INFORME DE FISCALIZACION SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL DEL EJERCICIO 1990

INFORME SINGULARIZADO DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL DEL AÑO 1990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

INFORME SINGULARIZADO DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL DEL AÑO 1.990

1) INTRODUCCION

1.1 Justificación del Informe

1.2 Objetivos

2) MARCO LEGAL QUE REGULA EL F.C.I.

3) METODOLOGIA

3.1 Consideraciones Generales.

3.2 Modificaciones de los proyectos del F.C.I.

3.3 Contratación de los Proyectos del F.C.I.

3.4 Tramitación de las Certificaciones realizadas y percepción definitiva de la misma.

3.4.1. Anticipos del F.C.I.

3.4.2. Certificaciones realizadas.

3.4.3. Percepción de las certificaciones remitidas a la Administración Central.

3.4.4. Contabilización del F.C.I.

3.5 Incorporación de remanentes.

ANEXO I: ALEGACIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD CCOMUTONOMA CANARIA.

ANEXO II: CUADROS.

1.- INTRODUCCION

Se ha fiscalizado la ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial (en adelante F.C.I.), ejercicio 1.990. El trabajo, cuyos resultados se resumen en este informe, se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que incluyen el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de los estados reflejados en este informe.

A su vez, se han tenido en consideración todas aquellas recomendaciones surgidas como conclusiones de las jornadas de trabajo de fiscalización del F.C.I., mantenidas con el Tribunal de Cuentas y con los Organos Autonómicos de Control Externo.

En opinión de esta Audiencia de Cuentas, los estados mencionados no expresan adecuadamente la realidad contable de los distintos F.C.I. de cada año objeto de este análisis, debido a la no aplicación del criterio del devengo a la hora de imputar los ingresos al ejercicio correspondiente. (Ver subepígrafe 3.4.4.).

Estos defectos vienen en gran parte motivados, sin que sirva de justificación, por la manera en que los anticipos del F.C.I. (ver subepígrafe 3.4.1.) han sido remitidos por parte de la Administración del Estado a la Autonómica, lo cual origina que para la correcta contabilización del F.C.I. sea necesario un exhaustivo y permanente seguimiento de los mismos, actitud que no se ha realizado hasta el momento por los responsables contables de la Comunidad Autónoma Canaria.

A su vez, la tendencia de la contabilidad de la Comunidad Autónoma Canaria de reagrupar en una única rúbrica (Ejercicios Cerrados) los movimientos económicos procedentes de años anteriores imposibilita el conocimiento exacto y concreto del seguimiento contable del F.C.I. año por año (ver epígrafe 3.4.4.).

Sin embargo, estos defectos no empañan la eficiente labor desarrollada previamente por la Intervención General en cuanto al control y seguimiento del F.C.I. por proyecto de inversión.

Son, por tanto, los aspectos contables los que han originado el contenido de la opinión del presente informe, por lo que se recomienda que por parte de la Intervención General se proceda con urgencia a la depuración y regularización contable de las cantidades que aparecen mal contabilizadas desde el ejercicio 1983.

A su vez, con objeto de que a partir del próximo informe a realizar sobre el F.C.I. (1991) no presente dichos defectos contables, es necesario que la documentación que se remite a la Intervención Delegada en el Tesoro, por parte del Servicio de Control del Sector Público de la Intervención General como justificante del Mandamiento de Ingreso, conste de una relación de los proyectos de inversión que financia, con indicación expresa del fondo (por año) que representa.

1.1.- Justificación del informe

El artículo 16.4 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 22 de septiembre de 1.980 (en adelante L.O.F.C.A.), establece textualmente:

"Cada territorio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I.), así como del estado de realización de los proyectos que con cargo al mismo estén en curso de ejecución.

De igual forma la Ley 7/84 de 31 de marzo (primera Ley del F.C.I.) dispone en su artículo 11 que los Organos de Control Externo de las Comunidades Autónomas presentarán ante las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de sus respectivas comunidades, informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo al F.C.I.

En virtud de ello, el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias aprobó, la elaboración de un informe singularizado del F.C.I. 1990.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 4/89 (Ley de la Audiencia de Cuentas) determina que la misma comience las funciones fiscalizadoras en el ejercicio 1990. El Pleno de la Audiencia acuerda, en interpretación de la citada disposición que las actuaciones fiscalizadoras se iniciarán sobre los actos que procedan del ejercicio económico 1989.

En virtud de lo cual, en este informe se hace un mayor hincapié en el seguimiento del F.C.I. 1989 y 1990, sin perjuicio de menciones de años anteriores cuando así se consideró necesario.

1.2.- Objetivos

Los objetivos a alcanzar en esta fiscalización han sido:

a) Verificar la regularidad contable de los créditos del F.C.I., comprobando la correcta imputación contable en cuanto al período y al F.C.I. particular que corresponda.

b) Examen de la regularidad legal de las actuaciones realizadas por los gestores del F.C.I., comprobando la naturaleza del gasto realizado, el análisis de las modificaciones efectuadas y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.

c) Análisis del Control Interno del F.C.I.

d) Determinar el grado de ejecución del F.C.I. por secciones presupuestarias y proyectos de inversión.

e) Analizar los ingresos producidos en la Comunidad Autónoma Canaria provenientes del F.C.I. (conciliación entre las cantidades satisfechas por la Administración Central y las que figuran ingresadas en el Tesoro de esta Comunidad).

f) Estudio de los cobros efectuados y comprobación del gasto realizado.

Para todo ello se solicitó de la Intervención General (concretamente del Servicio de Control del Sector Público), de la Intervención Delegada del Tesoro, y de la Dirección General de Presupuestos y Gasto Público la información necesaria.

2.- MARCO LEGAL QUE REGULA EL F.C.I.

El F.C.I. tiene su origen en el artículo 158.2 de la Constitución Española, el cual contempla la creación de un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, y cuyo fin consitirá en corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Los recursos de dicho fondo serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias; por lo tanto las transferencias correspondientes al F.C.I. deben contemplarse, pues, entre los recursos de las Comunidades Autónomas, tal como expresamente se recoge en el artículo 157.1c.

La Ley Orgánica 8/80 (L.O.F.C.A.), establece en su artículo 16 las bases que deberán regir el desarrollo del Fondo previsto en el menoionado artículo de la Constitución Española. Posteriormente, el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fijó con fecha 16 de septiembre de 1.981 los criterios de valoración para la distribución del F.C.I., según lo que establecía el artículo 16.1 de la mencionada Ley 8/80.

La Ley 44/83 de 28 de diciembre, que aprueba los Presupuestos del Estado para 1.984, aclara y reitera algunas de las normas señaladas en la Ley 8/80 estableciendo las bases para la confección de una Ley que regule el Fondo.

Con estos antecedentes el 31 de marzo de 1.984 se aprueba la Ley 7/84 que regula el F.C.I.

En febrero de 1.990 el Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció las coordenadas de la reforma del F.C.I.

Esta reforma es consecuencia del sistema financiero de las Comunidades Autónomas, cuyo esquema se desarrolla en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas cumpliendo la previsión establecida en el artículo 157 de la Constitución.

Dicho esquema fue concebido como un conjunto de dos grupos de recursos con dos finalidades distintas y específicas: por una parte, aquellos mecanismos cuya misión es proporcionar a las Comunidades Autónomas los medios necesarios para el funcionamiento y prestación de los servicios públicos que han asumido al amparo de sus Estatutos de Autonomía. Por otra, los mecanismos cuya finalidad es hacer efectivo entre ellas el principio de solidaridad financiera, operando en favor de los territorios menos desarrollados para coadyuvar al incremento de su riqueza y a la disminución de las diferencias de renta entre las distintas regiones del Estado.

Por distintos motivos, esta diferenciación nítida entre las dos clases de mecanismos antes citados no se llevó a efecto, de tal modo que en ambos grupos de instrumentos financieros se daban los dos finalidades.

En cuanto a los recursos destinados a hacer efectivo el principio de solidaridad, permanecieron sin reformas bajo su normativa inicial, sirviendo a su objetivo consustancial pero al mismo tiempo operando también como instrumento de financiación de los servicios públicos traspasados por el Estado.

En virtud de todo ello se consideró necesaria la reforma del Fondo de modo que, en adelante, éste sea un instrumento exclusivo de la solidaridad y se destine a la consecución del desarrollo de los territorios más desfavorecidos del Estado, que pasan a ser sus únicos beneficiarios.

Al mismo tiempo, habida cuenta de que hasta ahora el Fondo venía financiando en parte a los servicios traspasados por el Estado, se hace preciso encontrar a este problema una solución transitoria que entronque con el momento en que se revisara el Sistema de Financiación Básica, evento que se producirá el 1 de enero de 1.992. Con este fin se crea la Compensación Transitoria, que hasta la fecha antes indicada constituirá un recurso de financiación incondicionada de las Comunidades Autónomas al margen de la participación en los Ingresos del Estado y sin integrarse en ella.

Todo ello ha sido reflejado en la nueva Ley del F.C.I. (Ley 29/1.990, de 26 de diciembre), B.O.E. del 27 de diciembre.

3.- METODOLOGIA

3.1.- Consideraciones Generales.

El Fondo de Compensación Interterritorial para la Comunidad Autónoma Canaria 1.990 asciende a 14.037'70 Mp., tal como se recoge en la sección 33 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de dicho año (Ley 4/90, B.O.E. nº 156 de 30 de junio).

Esta cantidad no coincide con la reflejada en el artículo 1.3.d de la Ley 14/89, de Presupuestos Generales de la C.A.C. para 1.990 (B.O.C. nº 170 de 29 de diciembre de 1.989), la cual ascendía a 13.165 Mp.

La diferencia de 872'7 Mp. corresponde a incorporaciones de crédito por tranferencias del Estado realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/90 (Presupuestos estatales), y que por consiguiente fueron recogidas en la misma.

El siguiente cuadro (nº1) manifiesta la incidencia de este aumento presupuestario en cada una de las siete Consejerías en las que se materializó el F.C.I. del año 1990.

(en miles de pesetas)

Consejerías	FCI Inicial	Aumento	Definitivo
Agricultura y Pesca	1.431.637	40.000	1.471.637
Educación, Cultura y Deportes	2.326.536	264.700	2.591.236
Economía y Comercio	550.000	60.000	610.000
Industria y Energía	100.000	102.000	202.000
O. Públicas. Viv. y Agua	7.820.127	406.000	8.226.127
Política Territorial	400.000	___	400.000
Turismo y Transporte	536.700	___	536.700
TOTAL	13.165.000	872.700	14.037.700

CUADRO Nº 1

Por lo tanto, la cantidad definitiva del F.C.I. 1990 en Canarias asciende a 14.037,7 Mp, cifra que coincide con la obtenida de los listados de Contabilidad facilitados por la Intervención General.

Las diferencias puestas de manifiesto en el informe del F.C.I. 1989 no han sido subsanadas, manifestándose como los proyectos de inversión 89611255 "Incidencias Provincia de Santa Cruz de Tenerife" y 89611263 "Incidencias Provincia de Las Palmas" se mantienen contabilizados erróneamente (por fuente de financiación el primero y por cantidad presupuestada el segundo).

Solamente se ha corregido la diferencia no contabilizada de 267.000.-ptas comentada en la sección 16 "Turismo y Transportes", la cual se ha consignado en el proyecto 89616602 (Hotel Escuela).

Deberá procederse inmediatamente a corregir dichos defectos.

Sin embargo, la relación de proyectos estatales que integran el Fondo de Compensación Interterritorial alcanzan sólo 9.958,7 Mp. La diferencia con el global de proyectos financiados por el F.C.I. según la contabilidad de la Comunidad Autónoma Canaria (14.037,7 Mp) es de 4.079 Mp, que se corresponde exactamente con el importe de la Compensación Transitoria (ver marco legal) que ha recibido por doceavas partes iguales la Comunidad Autónoma Canaria a razón de 339.916.667.- ptas mensuales.

3.2.- Modificaciones de los Proyectos del F.C.I.

Las modificaciones sufridas durante 1990 de los proyectos financiados por el F.C.I. 1990 se deben principalmente a transferencias de crédito entre proyectos del mismo, si bien hay que señalar 872,7 Mp de modificaciones por incorporaciones de crédito del Estado.

Del análisis de la totalidad de los expedientes de modificaciones, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

A.- Incorporaciones de Crédito

El origen del mismo se encuentra en una previsión inicial del F.C.I. por parte de la Comunidad Autónoma Canaria inferior a la dotación real recogida en la Ley de Presupuestos Estatal. Esta diferencia fue originada en la tardía aprobación de la Ley de Presupuestos del Estado para 1990 (Junio de ese año).

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 23.02.90 acordó facultar al Consejero de Hacienda para llevar a cabo los ajustes contables necesarios para materilizar este incremento.

Los proyectos creados, así como su importe figuran en el cuadro nº 11 elaborado por esta Audiencia de Cuentas.

B.- Transferencias de Crédito

Se ha analizado el total de los 27 expedientes existentes. El importe global de los mismos (por programa) se observa en los siguientes cuadros nºs 2, 3, y 4.

	Programa	Transferencias Positivas	Negativas
422D	Construcción y equip. de Centros Escolares	781.938.061.-	781.938.061.-
455A	Cultura	17.750.000.-	17.750.000.-
512A	Ordenación e Infraestructura Hidraúlica	236.238.670.-	236.238.670.-
513A	Obras Públicas	1.252.500.000.-	1.252.500.000.-
513B	Ordenación y Apoyo al transporte	100.000.000.-	100.000.000.-
516A	Creac. y mejora de la Infraes. Turíst.	20.000.000.-	20.000.000.-
714B	Estruct. Agrarias y Mejora Medio Rural	961.990.376.-	961.990.376.-
714D	Estructura y Ordenación Pesquera	51.968.000.-	51.968.000.-
722A	Promoc. y Desarrollo Industr. y Artes.	-----	100.000.000.-
731A	Desarrollo Energético y Minero	100.000.000.-	-----
TOTAL 1990		3.522.385.107.-	3.522.385.107.-

CUADRO Nº 2

	Programa	Transferencias Positivas	Negativas
322B	Empleo y Formación	178.883.880.-	178.616.880.-
422D	Construcción y equip. de Centros Escolares	302.048.633.-	302.048.633.-
542B	Investigación y Desarrollo Tecnol. Agrario	-----	11.000.-
714B	Estruct. Agrario y mejora Medio Rural	63.000.000.-	63.000.000.-
714D	Estructura y Ordenación Pesquera	11.000.000.-	11.000.000.-
TOTAL 1989		554.932.513.-	554.676.513.-

CUADRO Nº 3

	Programa	Transferencias Positivas	Negativas
422D	Construc. y Equip. de Centros Escolares	10.363.140.-	10.363.140.-
TOTAL 1988		10.363.140.-	10.363.140.-

CUADRO Nº 4

Se manifiesta un uso excesivo de las modificaciones presupuestarias, en porcentajes, los 3.522 Mp de Transferencias corrientes representan un 25,09% del global del fondo.

De los expedientes analizados hay que destacar:

a) En el expediente 1/90 la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno es del 23 de febrero de 1990 mientras que el informe preceptivo del Comité de Inversiones Públicas Autonómico es del 6 de marzo. O sea, el informe preceptivo es posterior al acuerdo para el cual es neceasario.

b) Se observan dos casos en los que se vulnera el artículo 5 de la Ley 14/89 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para 1990, ya que se minoran créditos que han sido incrementados previamente. Este es el caso del PILA 90613438 (Pavimentación Acceso a la Cooperativa Fuencaliente) que se crea en el expediente 109/90 y se anula en el 284/90.

c) En los expedientes de modificaciones 276, 280 y 334790 no se han observado los acuerdos del Comité de Inversiones Públicas Estatal, tal y como establece la Ley del F.C.I.. En estos expedientes, en cambio, si se encuentran informes de la Intervención General y de la Dirección General de Presupuestos y Gasto Público haciendo referencia a la necesidad de contar con dicho acuerdo para tramitar el expediente.

Deben reducirse los excesivos cambios existentes entre los proyectos del F.C.I.

La política actual representa que gran parte de los proyectos ejecutados por el Gobierno Autonómico no guarden relación con los aprobados previamente por el Parlamento de Canarias en la Ley de Presupuestos.

3.3.- Contratación de los proyectos del F.C.I.

En este apartado se ha pretendido analizar 2 aspectos concretos:

a) Que las inversiones financiadas por el F.C.I. se hayan realizado de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Contratos del Estado.

b) Que las obligaciones reconocidas en el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos corresponden efectivamente a la inversión nueva y a la realizada dentro de los periodos.

La muestra elegida abarca las Consejerías de Obras Públicas, Vivienda y Agua y Educación, Cultura y Deportes, ya que entre ambas abarcan el 77% del presupuesto definitivo del F.C.I. 1990.

En ellas se ha comprobado (en función de una serie de expedientes solicitados -prácticamente el 100%-), por un lado. que el procedimiento de contratación se ha efectuado según la normativa vigente, así como que el total de las certificaciones remitidas por el contratista a la Consejería presentan la conformidad del técnico o jefe de servicio correspondiente.

En el informe del F.C.I. 1989 se ponía de manifiesto como los expedientes de obras realizadas por los centros gestores de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ajustaban exclusivamente a los requisitos exigidos por el Decreto 100/88 por el que se establece el sistema de fiscalización previa en materia de contratos de obras.

Ello originó que el informe recomendara la supresión del sistema de fiscalización limitada en la tramitación de dichos expedientes para esta Consejería, recomendación que fue tenida en cuenta y que dio origen al Decreto 37/91 por el que se exceptuaba de fiscalización limitada dichos expedientes.

De los expedientes analizados destacar la existencia de gastos abonados con cargo al F.C.I. que no corresponden estrictamente al espíritu que recoge el artículo 6 de la Ley 29/90 (2ª Ley del F.C.I.).

En dicho artículo se limita el uso del F.C.I. al declararse que se destinarán a financiar proyectos de inversión a efectuar por la Comunidd Autónoma que promuevan directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario.

Pues bien, se han observado abonos al personal laboral, así como redacciones de proyectos de obra financiados con cargo a la sección 22 de la Comunidad Autónoma Canaria (F.C.I.) en los que el beneficio directo o indirecto para la Comunidad Autónoma Canaria es más que dudoso.

Estos gastos adicionales y/o complementarios a obras del F.C.I., pero que no constituyen obra real deberán abonarse con cargo a aplicaciones presupuestarias ajenas al F.C.I.

A su vez, señalar que en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes existen varios expedientes que han necesitado de la convalidación del Consejo de Gobierno para su tramitación, dado los reparos efectuados por lal Intervención Delegada y confirmados por la Intervención General.

3.4.- Tramitación de las certificaciones realizadas y percepción de la misma

En este apartado la labor auditora se ha centrado en una triple vertiente:

1.- Comprobar que las certificaciones de los proyectos ejecutados se tramitan rápidamente a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. Para ello se ha verificado que el intervalo de tiempo entre las fechas de los documentos contables (fecha de contabilización en el diario de operaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias) y las fechas de salida de las certificaciones hacia la Administración del Estado se encuentran dentro de un plazo razonable.

2.- Obtener evidencia de la percepción de los fondos en plazo justificado. Para ello se ha confeccionado una cédula analítica que recoga las posibles demoras.

3.- Verificar que la contabilidad del F.C.I. se ha llevado a cabo según el principio del devengo, de forma que cada cobro haya sido recogido en el fondo correspondiente a su año, tal y como se recomendó en el informe del F.C.I. de 1989.

Antes de entrar a comentar estos tres apartados se hace necesario proceder a realizar brevemente un recordatorio de la forma en que se han contabilizado los anticipos del F.C.I.

3.4.1 Anticipos del F.C.I.

La antigua ley del Fondo (ley 7/84) estipulaba en su artículo 10.2 que los gestores de las Comunidades Autónomas dispondrán de la tesorería correspondiente al importe global del fondo por cuartas partes, efectuándose los oportunos libramientos dentro de los quince primeros días de cada trimestre por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales (Ministerio de Economía y Hacienda), previa solicitud en que se relacionen los datos relativos a las obras ejecutadas, adquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas en el trimestre inmediatamente anterior.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico no presentaba justificación el punto segundo de este apartado, ya que de acuerdo con el contenido de las sentencias 63/1986, de 21 de mayo, y 183/88, de 13 de octubre, del Tribunal Constitucional, se declara inconstitucional (basándose en la vulneración del principio de autonomía, el cual exige que las actuaciones de la Administración Autonómica no sean controladas por la Administración del Estado) parte del artículo 10.2 de la ley 7/84, de 31 de marzo, que regula el F.C.I., poniendo de manifiesto que el cobro del mismo se tiene que realizar por cuartas partes sin que sea preceptivo la solicitud en la que se relacionan los datos relativos a las inversiones ejecutadas.

Estas sentencias no fueron llevadas a la práctica por la Administración Central,por lo que el procedimiento de ingreso en la Comunidad Autónoma Canaria del Fondo se venía realizando tal y como estipulaba dicho artículo.

A su vez, la Disposición Transitoria 3ª señalaba: "La entrega de fondos trimestral a que se refiere el apartado 2 del artículo 10 se efectuará, por un sóla vez, sin la justificación correspondiente a las inversiones efectuadas en los primeros quince días del mes de enero inmediatamente siguientes a la entrada en vigor de la ley.

Este anticipo recogido en la Disposicion Transitoria 3ª no se ha cumplido, tanto si se refiere al plazo establecido, como al objetivo establecido por el legislador.

De esta manera, y hasta 1990 inclusive, el mecanismo seguido consistía en calcular el importe del 25% del F.C.I. correspondiente a ese año y restarle a dicha cantidad el 25% del F.C.I. del año anterior. El resultado obtenido era el neto o líquido que se remitía a la Comunidad Autónoma.

Este mecanismo implica graves problemas a la hora de contabilizar el ingreso, ya que al ser el anticipo una cantidad que va evolucionando cuantitativa y temporalmente, ocasionaría que al fin del ejercicio deberían existir una serie de ajustes compensadores entre las cantidades pendientes de cobrar de los diversos fondos. Este anticipo ha sufrido importantes modificaciones durante 1990, ya que en un primer momento se transfirió por la Administración Central por el importe bruto (y no compensado por el 25% del año anterior como era norma) debido a que la Ley de Presupuestos del Estado para 1990 se aprobó en junio de dicho año. Posteriormente, se comunica a la Comunidad Autónoma de Canarias que al no contemplar dicha Ley de Presupuestos (Ley 4/1990) el anticipo, se procede a cancelarlo con las cerificaciones remitidas a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. Este postura originó un escrito del Consejero de Hacienda solicitando aclaración del tema.

El resultado final (confirmado en la respuesta de la Dirección General de Coordinación al anterior escrito) ha sido el envío de las cantidades ordenadas y pendientes de certificar por la Comunidad Autónoma de Canarias de los fondos 84 al 88 inclusive, así como el anticipo del 25% del F.C.I. 1989.

Este anticipo de 1989 ascendía a 2.582.014.500.-ptas que corresponde al 25% de 10.328.059.000.-ptas, importe global del F.C.I 1989 tras el recorte de 1.422.431.000.-ptas realizado por el Consejo de Ministros (ver informe F.C.I. 1989). Fue contabilizado el 27 de marzo de 1991.

A su vez, en tesorería de la Comunidad Autónoma Canaria se había recibido un "OK" de la Administración Central por 751.275.000.-ptas que corresponde al 25% de la diferencia entre el F.C.I. inicial 1989 (11.750.500.000.-ptas) y el F.C.I. 1988 (8.745.400.000.-ptas). Fue contabilizado el 26 de abril de 1989.

El anticipo de 1990 (2.937.625.000.-ptas), que corresponde al 25% del F.C.I. 1990 se contabilizó el 3 de mayo de 1990 y representó el último de los anticipos realizados en base a la ley 7/84 (antigua ley del fondo). En este último anticipo, el F.C.I. se consideró como idéntico al de 1989 (11.750.500.000.-ptas) ya que la Ley de Presupuestos Estatal para 1990 se aprobó en junio de dicho año, y por lo tanto se prorrogó la existente del año anterior.

En consecuencia, es obvio que el resultado de todo ello representa que la contabilidad (por parte de ingresos) del F.C.I. necesita un seguimiento continuo de todos estos cambios, para que de esta forma los importes contabilizados en los diferentes F.C.I. se refieran exactamente al año concreto origen de su contabilización.

3.4.2.- Certificaciones realizadas

Las certificaciones realizadas con cargo a las diversas cantidades del F.C.I. que aún estaban en vigor (y que vienen desde el año 1983) se remiten por la Intervención General de la Comunidad Autónoma Canaria a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

Los datos para elaborarlas se obtienen del P.I.C.C.A.C., ya que en él se reflejan todas las operaciones contables de gastos de esta Comunidad.

Estas certificaciones se remiten a la Administración Central con un tendencia bimensual.

A su vez, el mecanismo de control para verificar la obra ejecutada es correcto, al basarse en los propios datos que reflejan la contabilidad presupuestaria del P.I.C.C.A.C..

A continuación, se presenta el cuadro nº 5, donde se recoge la fecha de las certificaciones remitidas a la Administración Central con cargo a los FONDOS de 1989 y 1990 (desde el 1 de enero de 1989 al 31 de diciembre de 1990).

Fecha Certificación	Importe F.C.I.	Año origen
20.12.89	3.504.358.226.-	1989
06.03.90	727.352.891.-	1989
06.03.90	2.830.164.965.-	1989
03.05.90	26.996.968.-	1989
11.05.90	7.580.641.-	1989
22.06.90	386.610.226.-	1989
22.06.90	1.899.143.854.-	1990
28.06.90	(163.152)	1989
13.07.90	41.450.948.-	1989
13.07.90	718.274.311.-	1990
19.11.90	483.808.858.-	1989
19.11.90	1.427.472.048.-	1990

CUADRO Nº 5

3.4.3.- Percepción de las certificaciones remitidas a la Administración Central.

A continuación se presenta el cuadro nº 6, elaborado por esta Audiencia de Cuentas a través de la información recibida por parte de la Intervención General y de la Intervención Delegada del Tesoro, y referido al cobro del F.C.I. 1989 y F.C.I. 1990 hasta la fecha de emisión del presente informe.

Este cuadro es complementario al anteriormente citado en el punto anterior de este mismo apartado.

Fecha Certificación	Importe F.C.I.	Año Origen	Contabilización C.A.C.
20.12.89	3.504.358.226.-	1989	2.937.625.000.(1) 566.733.226.(2)
06.03.90	727.352.891.-	1989	22.08.90
06.03.90	2.830.164.965.-	1989	22.08.90
03.05.90	26.996.968.-	1989	08.11.90
11.05.90	7.580.641.-	1989	08.11.90
22.06.90	386.610.226.-	1989	19.02.91
22.06.90	1.899.143.854.-	1990	(1)
28.06.90	(163.152)	1989	19.02.91
13.07.90	41.450.948.-	1989	19.02.91
13.07.90	718.274.311.-	1990	(1)
19.11.90	483.808.858.-	1989	262.117.071 (1)
			221.691.787 (3)
19.11.90	1.427.472.048.-	1990	1.107.265.213 (4)
			320.206.835 (1)

CUADRO Nº 6

(1) Cancelan Anticipos remitidos previamente por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

(2) Contabilizado el 22.08.90.

(3) Contabilizado el 18.06.91.

(4) Contabilizado el 07.06.91.

De este cuadro pueden obtenerse las siguientess conclusiones:

1) Los anticipos anuales se han remitido con bastante retraso en relación a la primera quincena de enero que estipula la Ley del F.C.I..

2) Alrededor de 7 meses es la media habitual entre la certificación remitida a la Administración Central y la contabilización del mandamiento de ingreso de dicho libramiento. Si bien esta media se reduce si se tiene en cuenta la entrada en tesorería de la Comunidad Autónoma Canaria, en vez de la fecha de contabilización, se considera bastante elevada.

Debe exigirse por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria una mayor celeridad de la Administración Central para el abono del anticipo y las certificaciones remitidas.

3.4.4.- Contabilización del F.C.I.

En los cuadros nºs 7 y 8 se expone un resumen de la contabilización de los F.C.I. 1989 y 1990. En ambos se manifiesta la inexistencia de principios contables a la hora de contabilizar en uno u otro fondo.

F.C.I. 1989

Año Contabilización	Concepto	Mandamiento de Ingreso	Acumulado
1989	Inicial	11.750.500.000.-	-----
1989	Anticipo 1989 (1)	(751.275.000)(2)	10.999.225.000
1989	Recorte Presupuestario	(1.422.431.000)	9.576.794.000
1990	Cobro Certific. (3)	(566.733.226)(4)	9.010.060.744
1990	Cobro Certific. 6.3.90	(3.557.517.856)	5.452.542.918
1990	Anticipo 1990 (5)	(2.937.625.000)(6)	2.514.917.918
1990	Cobro certific. (7)	(34.577.609)	2.480.340.309
1991	Aumento contable (8)	889.197.887	3.369.538.196
1991	F.C.I. 88	(1.039.800.844)	2.329.737.352
1991	F.C.I. 88	(306.845.082)	2.022.892.270
1991	Cobro certifc. (9)	(427.898.022)	1.594.994.248
1991	Anticipo 89 (10)	(1.594.994.248)	-----

CUADRO Nº 7

(1)-(2) Este anticipo corresponde al 25% de la diferencia entre el F.C.I. 1989 y el F.C.I. 1988. Numéricamente:

F.C.I. 1989 11.750.500.000.-
F.C.I. 1988 8.745.400.000.-

Diferencia 3.005.100.000 x 25%= 751.275.000.-

A pesar de remitir sólo esta cantidad como anticipo F.C.I. 1989, para la Administración Central el anticipo 1989 ascendía a 2.937.625.000.-ptas, cantidad resultante de obtener el 25% de los 11.750.500.000.-ptas del F.C.I. 1989.

(3)-(4) Cobro Certificaciones del 20.12.89 y cancela anticipo de 2.937.625.000.-.

Certificado el 20.12.89 3.504.358.226.-
Anticipo 1989 2.937.625.000.-

Diferencia (cobrado) 566.733.226.-

(5)-(6) Este anticipo corresponde al del año 1990, ya que la Ley de Presupuestos Estatal para dicho año se aprobó en junio de 1990, por lo que se prorrogó la de 1989. Esta cantidad, a diferencia de los anteriores anticipos se ingresó en su totalidad por la Comunidad Autónoma Canaria (ver punto 3.4.1.).

A pesar de contabilizarse como F.C.I. 1989, se canceló mediante certificaciones del F.C.I. 1990.

(7) Corresponde a las certificaciones remitidas el 03.05.90 y el 11.05.90.

(8) Este aumento corresponde a la peculiar contabilización que como se comenta al final de este mismo subepígrafe lleva a cabo la Comunidad Autónoma Canaria. El 1 de enero de 1991 se engloba el pendiente de cobro de 1989 con el de ejercicios anteriores, ya que a esa fecha 1989 se considera ejercicios anteriores al anterior. En las alegaciones al presente informe a realizar por la Consejería de Hacienda deberá especificarse los años origen de este pendiente de cobro.

(9) Corresponde a las certificaciones del F.C.I. 1989 remitidas el 22.06.90, el 13.07.90 y el 28.06.90 (esta última corrección de la primera).

(10) Este anticipo era de 2.582.014.500.-ptas; la diferencia (-987.020.252.-) se contabiliza como F.C.I. 1990.

F.C.I. 1990

Año Contabilización	Concepto	Mandamiento de Ingreso	Acumulado
1990	Inicial	13.165.000.000	------
1990	Incorporación Crédito	872.700.000.-	14.037.700.000.-
1990	Com. transitoria (1)	(2.379.416.667)	11.658.283.333.-
1990	Com. trans. Agosto 90	(339.916.667)	11.318.366.666.-
1990	Com. trans. Sept. 90	(339.916.667)	10.978.449.999.-
1990	Com. trans. Octub. 90	(339.916.667)	10.638.533.332.-
1991	Com. trans. Nov. 90	(339.916.667)	10.298.616.665.-
1991	Com. trans. Dic. 90	(339.916.665)	9.958.670.000.-
1991	Anticipo FCI 84-89(2)	(2.834.619.090)	7.124.080.910.-
1991	Cobro certificac.(3)	(1.107.265.213)	6.016.815.697.-
1991	" " 05.02.91	(1.664.647.768)	4.352.167.929.-
1991	" " 07.03.91	(2.623.494.271)	1.728.673.658.-
1991	" " 22.07.91	(144.058.407)	1.584.615.251.-

CUADRO Nº 8

(1) Corresponde al cobro de la compesanción transitoria de enero a julio de 1990.

(2) Desglosado por año es:

F.C.I. 1984 324.374.595.-
F.C.I. 1985 114.955.287.-
F.C.I. 1986 64.634.371.-
F.C.I. 1987 450.977.425.-
F.C.I. 1988 892.657.160.-
F.C.I. 1989 987.020.252.-

(3) Corresponde a la certificación del 19.11.90 de 1.427.472.048, la diferencia por el importe contabilizado (1.107.265.213.-) cancela el anticipo de 2.973.625.000.-ptas del F.C.I. 1990, que como se ha visto se contabilizó como F.C.I. 1989.

Tal y como se comentó se observa lo siguiente:

1) F.C.I. 1989

A) Se ha contabilizado como tal un Mandamiento de Ingreso (M.I.) por 2.937.625.000.-ptas, el cual es el anticipo del F.C.I. 1990.

B) Se han contabilizado dos ingresos por 1.039.800.844.-ptas y 306.845.082.-ptas correspondientes a F.C.I. 1988.

C) La parte de la certificación del 19.11.90 (483.808.858.-) que no cancela anticipos (221.691.787.-) se contabilizó como F.C.I. 1988 o anteriores.

2) F.C.I. 1990

A) Se ha contabilizado como tal el pendiente de cobro de los fondos 1984-1988, así como una parte del 2º (y definitivo) anticipo de 1989. Estas cantidades se desglosan tal y como se comentó en el punto (2) cito a continuación del cuadro nº 8.

A su vez, el programa informático-contable de la Comunidad Autónoma Canaria no facilita la información desglosada por año. Ello se debe a que se basa en la regla de la Instrucción de Contabilidad Presupuestaria del Gasto Público aprobada por Orden de 17 de diciembre de 1987, de la Consejería de Hacienda, en desarrollo del Decreto 40/87 de 7 de Abril, la cual establece que las agrupaciones a que pueden afectar los documentos contables son (entre otros):

-ejercicio corriente
-ejercicio anterior
-ejercicios anteriores al anterior

Esta práctica representa grandes problemas ya que dificulta el seguimiento anualizado del F.C.I. (y de cualquier otra magnitud contable), así como origina graves deficiencias e incorrecciones contables.

Con un ejemplo se observa claramente:

A 31 de diciembre de 1989 el pendiente de cobro del F.C.I. es de 4.000 Mp. por lo que dicha cantidad a 1 de enero de 1990 aparece como pendiente de cobro del ejercicio anterior.

A 31 de diciembre de 1990 de esa cantidad se ha cobrado 2.500 Mp., quedando por tanto 1.500 Mp. de pendiente de cobro.

Pero a 1 de enero de 1991, y suponiendo que del ejercicio 1988 quedaban 350 Mp. por cobrar aparece como pendiente de cobro de ejercicios anteriores al anterior 1.850 Mp., ya que se han agrupado ambas cantidades, con lo cual, el seguimiento posterior muchas veces se hace imposible.

A su vez, ¿qué ocurre con un mandamiento de ingreso del F.C.I. 1988 que por error se ha contabilizado en 1989?. En teoría, a 1 de enero 1991, al agruparse ambos ejercicios estaría bien contabilizado.

Estos hechos se agudizan aún más con la orden de la Consejería de Hacienda del 11 de diciembre de 1990, en la que por facilitar la contabilidad a los centros gestores se reagrupa el ejercicio anterior y los ejercicios anteriores al anterior en ejercicios cerrados.

Por lo tanto, al no quedar el movimiento y la situación de estos anticipos reflejada adecuadamente en la contabilidad debe procederse inmediatamente a una depuración del F.C.I. por año, contabilizándose cada partida recaudada en función del año del devengo.

3.5.- Incorporación de Remanentes

Se ha procedido a comprobar el cumplimiento del artículo 7 de la Ley del Fondo (Ley 29/90), la cual en su apartado quinto afirma textualmente: "Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, los remanentes de créditos del Fondo en un ejercicio económico quedarán afectos en los siguientes a la ejecución del respectivo proyecto de inversión o, en su caso, del que le sustituya, a cuyos efectos dichos remanentes seran incorporados automáticamente".

Esta postura no hace más que reafirmar la anteriormente existente en el artículo 12.1 de la ley 7/84 (primera Ley del Fondo).

Este mismo tratamiento viene recogido en las órdenes de la Consejería de Hacienda (Orden de 30 y 26 septiembre de 1989 y 1990) en la que se regulan las operaciones de cierre de los ejercicios 1989 y 1990, y apertura de 1990 y 1991 respectivamente, en relación a la contabilidad de los gastos públicos.

Para verificar estas incorporaciones se ha procedido a contrastar el estado de ejecución al 31 de diciembre de 1990 con dicho estado a 1 de enero de 1991.

Se han analizado los globales de los Fondos pendientes de ejecutar, el primero de los cuales corresponde al año 1983, y del resultado se observa como la totalidad de los remanentes se incorporan correctamente, tal y como se observa en el cuadro nº 9.

	F.C.I. pendiente de ejecutar al 31.12.89	Crédito Inicial F.C.I. anteriores al 01.01.90
F.C.I. 1989	3.254.305.653.-	3.254.305.653.-
F.C.I. 1988	1.119.241.237.-	1.119.241.237.-
F.C.I. 1987	476.936.913.-	476.936.913.-
F.C.I. 1986	44.712.052.-	44.712.052.-
F.C.I. 1985	4.718.753.-	4.718.753.-
F.C.I. 1984	320.232.913.-	320.232.913.-
F.C.I. 1983	802.052.-	802.052.-

CUADRO Nº 9

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 1992.

EL PRESIDENTE.

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

Fdo.: Antonio Márquez Fernández.

ANEXO I: ALEGACIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA.

Visto el informe de fiscalización sobre el Fondo de Compensación Interterritorial 1990 remitido por esa Audiencia de Cuentas, se considera preciso formular las siguientes alegaciones:

a) En relación a la oponión expresada en el mismo, le significo que los defectos observados en cuanto a la contabilización del ingreso no desvirtúan los controles extracontables permanentes que se llevan a cabo por esta Intervención General a través del Servicio de Control Público que permiten conocer con exactitud los importes pendientes de ingreso del F.C.I. de cada ejercicio. En este aspecto, el seguimiento realizado no se limita a la ejecución de los proyectos de inversión afectos al F.C.I., en el área de Gastos, sino que además incluye el seguimiento correspondiente en el área de los ingresos.

b) En relación a las diferencias en los proyectos de inversión del F.C.I. 1989 89.6112.55 y 89.6112.63 comentadas en el apartado 3.1 de su informe, este Centnro Directivo considera que es incorrecta su calificación como errores de contabilización, dado que el origen de las mismas está en la presupuestación, al no asignarse códigos diferentes al crédito a financiar con F.C.I. y con C.A.. Esto no ha impedido que se realizase con normalidad el seguimiento contable y la gestión de cobro derivada de su ejecución. Por otra parte, tampoco procede realizar corrección alguna, por cuanto a esta fechas ambos proyectos están totalmente ejecutados.

c) En cuanto al último párrafo del mismo apartado 3.1 relativo al F.C.I. del ejercicio 1990 (dato que omite en su informe), le indico que si bien el crédito definitivo del F.C.I. 1990 en el Presupuesto de Gastos de la C.A.C. a 31.12.90 asciende a 14.037,7 Mill. ptas, comprendiendo la dotación de la Compensación Transitoria, existe Acuerdo de Gobierno de 9 de abril de 1991 sobre Reprogramación del F.C.I. 1990 donde se hà definido detalladamente los proyectos a financiar con F.C.I.

EL INTERVENTOR GENERAL

ANEXO II. CUADROS

ASIGNACION DEL F.C.I. PARA 1.990 POR SECCION/PROGRAMA
PRESUPUESTARIO EN TERMINOS DE PRESUPUESTO DEFINITIVO

SECCION	PROGRAMA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	%
ECONOMIA Y COMERCIO	622-A COMERCIO Y CONSUMO	610.000.000	4,345441205
OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUA	431-A VIVIENDA	200.000.000	1,424734821
OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUA	512-A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1.058.000.000	7,536847204
OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUA	513-A OBRAS PUBLICAS	6.968.127.000	49,63866588
POLITICA TERRITORIAL	432-A URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	400.000.000	2,849469642
AGRICULTURA Y PESCA	542-B INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	100.000.000	0,712367411
AGRICULTURA Y PESCA	714-B ESTRUCTURAS AGRARIAS Y MEJORAS DEL MEDIO RURAL	1.202.000.000	8,562656276
AGRICULTURA Y PESCA	714-D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	114.637.000	0,816636629
AGRICULTURA Y PESCA	714-E DESARROLLO PESQUERO Y FORMAC. PROFESIONAL PESQUERA	55.000.000	0,391802076
INDUSTRIA Y ENERGIA	722-A PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL Y ARTESANAL	2.000.000	0,014247348
INDUSTRIA Y ENERGIA	731-A DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO	200.000.000	1,424734821
TURISMO Y TRANSPORTE	513-B ORDENACION Y APOYO AL TRANSPORTE	136.700.000	0,97380625
TURISMO Y TRANSPORTE	516-A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAEST. TURISTICA	400.000.000	2,849469642
EDUC. CULT. Y DPTES.	422-D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	2.249.236.000	16,02282425
EDUC. CULT. Y DPTES.	455-A CULTURA	342.000.000	2,436296544
TOTAL		14.037.700.000	100

CUADRO Nº 10 FUENTE: AUDIENCIA DE CUENTAS

MODIFICACIONES DEL F.C.I. 1.990

PROGRAMA	PI-LA	NOMBRE	TIPO DE MOFICACION	IMPORTE
422-D	90618313	16 UDS. E.G.B. Y RESIDENCIA SAN ANDRES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(568)
422-D	90618314	16 UDS. E.G.B. CUESTA CABALLERO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(302)
422-D	90618318	24 UDS. E.G.B. EN AÑAZA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(47.037.445)
422-D	90618319	16 UDS. E.G.B. PLAYA HONDA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(44.150.457)
422-D	90618320	8 UDS. E.G.B. LOS ABRIGOS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(558)
422-D	90618321	16 UDS. E.G.B. SAN GREGORIO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(648)
422-D	90618322	8 UDS. E.G.B. LAS MESAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(12.500.000)
422-D	90618323	8-16 UDS. E.G.B. EL SOBRADILLO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(30.974.406)
422-D	90618324	8 UDS. E.G.B. PLAYA BLANCA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(50.000.000)
422-D	90618329	16 UDS. E.G.B. LOS GERANIOS-ARRECIFE	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(39.923.644)
422-D	90618404	1200 P.E. F.P. SALUD ALTO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(735)
422-D	90618406	9 UDS. F.P. GRANADILLA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(95.594.000)
422-D	90618407	840 P.E. F.P. MASPALOMAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(99.939.853)
422-D	90618408	AMPLIACION F.P. TEROR	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(25.000.000)
422-D	90618419	I.F.P. LA ISLETA-LAS PALMAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	30.000.000
422-D	90618504	24 UDS. BUP Y 24 UDS EGB	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(354.888.000)
422-D	90618505	610 P.E. BUP CAPELLANIA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(575)
422-D	90618506	AMPLIACION I.B. LA ROCHA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(228)
422-D	90618508	I.B. DOMINGO RIVERO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(21.850.286)
422-D	90618511	960 P.E. BUP ESCALERITAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	4.305.398
422-D	90618512	640 P.E. SAN CRISTOBAL	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	69.556.953
422-D	90618513	24 UDS BUP GUANARTEME	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	30.000.000
422-D	90618701	CENTRO DE PROFESORES PUERTO DEL ROSARIO	INCORP. CRED. TRANS. ESTADO	21.000.000
422-D	90618702	CENTRO DE PROFESORES SAN SEBASTIAN	INCORP. CRED. TRANS. ESTADO	21.000.000
422-D	90618703	CENTRO DE PROFESORES VALVERDE	INCORP. CRED. TRANS. ESTADO	21.000.000
422-D	90618704	CENTRO DE PROFESORES SUR DE TENERIFE	INCORP. CRED. TRANS. ESTADO	21.000.000
422-D	90618705	CENTRO DE PROFESORES ARRECIFE	INCORP. CRED. TRANS. ESTADO	25.000.000
422-D	90618706	CENTRO DE PROFESORES S.C. DE LA PALMA	INCORP. CRED. TRANS. ESTADO	25.000.000
422-D	90618804	INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	300.000.000
422-D	90618805	EQUIPAMIENTO DE CENTROS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	258.152.066
422-D	90618J01	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SUR DE G.C.	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	20.000.000
422-D	90618J02	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SUR DE TENERIFE	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	20.000.000
422-D	90618J03	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PUERTO DEL ROSARIO	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	20.000.000
422-D	90618J04	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS S/C DE LA PALMA	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	20.000.000
422-D	90618J05	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ARRECIFE	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	20.000.000
422-D	90618J06	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN SEBASTIAN	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	15.350.000
422-D	90618J07	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS VALVERDE	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	15.350.000
422-D	90718301	CONVENIO AYTO YAIZA 8 UDS. PLAYA BLANCA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	50.000.000
455-A	90717201	CREACION, REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(17.750.000)
455-A	90717201	CREACION, REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	10.450.000
455-A	90717204	CASA DE LOS ARROYO (DIVERSOS MUNICIPIOS)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	7.300.000
512-A	90611206	ABASTEC. Y SANEAMIENTO PLAYA BLANCA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(580.000)
512-A	90611217	SANEAMIENTO LAS MERCEDES-LAS CANTERAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(513.890)
512-A	90611218	ABASTECIMIENTO A GRANADILLA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(144.780)
512-A	90611223	INCIDENCIAS PROVINCIA DE STA CRUZ DE TENERIFE	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	658.670
512-A	90611227	INCIDENCIAS PROVINCIA DE LAS PALMAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	235.580.000
512-A	90611228	OBRAS AGUAS ENTRE DEPOSITOS (LAS PALMAS)	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	51.000.000
512-A	90611229	SUSTITUC.CONDUC.AGUA DE PTO ROSARIO A CORRALEJO	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	100.000.000
512-A	90611230	PROLONG.CANAL GARAFIA-TUNEL TIJARAFE-LOMO CABALL	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	50.000.000
512-A	90611416	E.D.A.R. LAS PALMAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(235.000.000)
513-A	90611112	AUTOPISTA GC-1	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	18.000.000
513-A	90611122	RED SANTA CRUZ-LAGUNA (AVDA MARITIMA)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(229.500.000)
513-A	90611128	AUTOPISTA TF-1	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	16.000.000
513-A	90611169	NUEVA CARRET. CIRCUNV. PTO CARMEN	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	1.500.000
513-A	90611171	RED ARTERIAL LAS PALMAS (PENETRAC. NORTE)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(423.000.000)
513-A	90611173	VIA SERVICIO AUTOPISTA SUR DE TENERIFE	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	75.000.000
513-A	90611174	ENLACES DE EL TABLERO Y DESDOBLÁMIENTO C-812	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	100.000.000
513-A	90611175	CONSTRUCCION VIA LENTA GC-200 (LAS PALMAS DE G.C.)	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	30.000.000
513-A	90611178	ENLACE SAN BENITO (LA LAGUNA)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	19.303
513-A	90611179	GALERIA AVAN.TUNEL NUEVA CTRA.VALVERDE-FRONTERA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	8.000.000
513-A	90611180	ACONDICIO. C-830 DE S/C DE LA PALMA-PUNTAGORDA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	18.000.000
513-A	90611181	PUERTO DE AGAETE	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	20.000.000
513-A	90611182	ACONDICIONAMIENTO C-814 ARUCAS A TELDE	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	85.000.000
513-A	90611183	ACONDICIONAMIENTO C-812 LAS PALMAS G.C.A MOGAN	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	25.000.000
513-A	90611184	ACONDICIONAMIENTO AVDA. MARITIMA DE LAS PALMAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	10.000.000

PROGRAMA	PI-LA	NOMBRE	TIPO DE MOFICACION	IMPORTE
513-A	90611185	ENLACE RONDA DE ARRECIFE	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	13.292
513-A	90611186	CINCURVALACION A TELDE	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	500.000
513-A	90611404	EXPROPIACIONES EN OBRAS DEL B.E.I.	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	100.000.000
513-A	90611405	VIA STA MARIA DEL MAR-LAS CHUMBERAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	350.000.000
513-A	90611406	VIA LOS GLADIOLOS-EL TABLERO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	150.000.000
513-A	90611411	AUTOPISTA PASITO BLANCO-ARGUINEGUIN	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(500.000.000)
513-A	90611415	ACCESO A VALLE GRAN REY	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(100.000.000)
513-A	90611187	A.T., ESTUDIOS, REDACCION PROYECTOS Y DIRECC.OBRAS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	235.480.697
513-A	90611188	ACTUACIONES PUNTUALES E INCIDENCIAS (DIV. MUNICIPIOS)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	214.986.708
513-B	90616401	ESCUELA FORM. Y CAPAC. PROF. TRANSPORTISTA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(100.000.000)
513-B	90616402	ESCUELA FORM. Y CAPAC. PROF. TRANSPORTISTA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	100.000.000
516-A	90616103	ACONDICIONAMIENTO VIAL-AEROCLUB	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	20.000.000
516-A	90716105	ACONDICIONAMIENTO VIAL-AEROCLUB	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(20.000.000)
622-A	90709302	PLAN REGIONAL DE MERCADOS (DIVERSOS MUNICIPIOS)	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	60.000.000
714-B	90613406	MEJORA CAMINOS AGRICOLAS EN FUERTEVENTURA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(17.815.306)
714-B	90613407	REUTILIZACION DE AGUAS Y MEJORAS EN G.C.	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(250.000.000)
714-B	90613408	MEJORA DE CAMINOS EN LANZAROTE	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(80.000.000)
714-B	90613409	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN G.C.	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(60.000.000)
714-B	90613410	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN TENERIFE	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(150.000.000)
714-B	90613411	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN EL HIERRO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(60.000.000)
714-B	90613412	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA PALMA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(80.000.000)
714-B	90613413	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA GOMERA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(60.000.000)
714-B	90613414	MEJ.DE REGADIOS Y REUTILIZ. AGUAS DEPURAD.	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(41.551.384)
714-B	90613415	MEJORA DE REGADIOS EN EL HIERRO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(20.000.000)
714-B	90613416	MEJORA DE REGADIOS EN LA PALMA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(127.623.686)
714-B	90613417	MEJORA DE REGADIOS EN LA GOMERA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(15.000.000)
714-B	90613418	CAMINO BAHIA DE FORMA (SANTA LUCIA)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	10.500.000
714-B	90613419	CAMINO EL TABLERO (MOYA)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	13.000.000
714-B	90613420	CAMINO BARRIO EL RISCO (AGAETE)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	5.000.000
714-B	90613421	CAMINO SAN ISIDRO MADRE DEL AGUA (TEROR)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	12.000.000
714-B	90613422	CAMINO CUEVAS BLANCAS (TELDE)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	10.500.000
714-B	90613423	CAMINO EL ROQUE-HOYA MARINA (VALSEQUILLO)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	9.000.000
714-B	90613424	CAMINO SAN JUAN (ARICO)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	35.000.000
714-B	90613425	CAMINO LAS COLORADAS (GÜIMAR)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	30.000.000
714-B	90613426	CAMINO ACCESO A JOVER (LA LAGUNA)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	25.000.000
714-B	90613427	CAMINO IGUESTE A CRUZ COLORADA (CANDELARIA)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	22.000.000
714-B	90613428	CAMINO LAS BARRERAS (EL ROSARIO)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	12.000.000
714-B	90613429	CAMINO BILLETE,AGUA GARCIA, HOYA LOS LIRIOS (TEGUISE)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	21.000.000
714-B	90613430	CAMINO LA BABOSERA (EL SAUZAL)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	5.000.000
714-B	90613431	DIVERSOS CAMINOS (VALVERDE)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	17.500.000
714-B	90613432	DIVERSOS CAMINOS (FRONTERA)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	42.500.000
714-B	90613433	PISTA CATELA (GARAFIA)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	16.000.000
714-B	90613434	DIVERSOS CAMINOS (TIJARAFE)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	9.773.000
714-B	90613435	CAMINO ALMACEN DE RODRIGO (TAZACORTE)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	6.000.000
714-B	90613436	CAMINO BARRANQUILLO-LAS LOMADAS Y EL TANQUE (TAZACORT	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	14.000.000
714-B	90613437	CAMINO MONTE PUEBLO EL LINAR (MAZO)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	9.400.000
714-B	90613438	PAVIMENTACION ACCESO A LA COOPERATIVA FUENCALIENTE	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	6.827.000
714-B	90613439	PISTA A LA LOMADITA DE GALLEGOS (BARLOVENTO)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	8.000.000
714-B	90613440	CAMINO MARTIN LUIS (PUNTALLANA)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	10.000.000
714-B	90613441	DEPOSITO VALLE SAN LORENZO (ARONA)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	41.551.384
714-B	90613442	PISTA TAMARGADA 2 FASE (VALLEHERMOSO)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	10.000.000
714-B	90613443	CAMINO LAS CABEZADAS (HERMIGUA)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	20.000.000
714-B	90613444	PISTA LA VIZCAINA (2 FASE) (VALLE GRAN REY)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	20.000.000
714-B	90613445	PISTA DE LAS YEDRAS (AGULO)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	10.000.000
714-B	90613446	CAMINO ENTRE C. BAJAMAR Y MARTIN LUIS (PUNTALLANA)	INCORP. CRED. TRANSF. ESTA	40.000.000
714-B	90613455	MEJORA DE CAMINOS EN YAIZA	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	35.000.000
714-B	90613456	MEJORA DE CAMINOS EN SAN BARTOLOME	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	25.000.000
714-B	90613457	MEJORAS DE CAMINOS RURALES EN TIAS	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	20.000.000
714-B	90613458	MEJORA DE REGADIOS EN PUNTAGORDA	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	10.000.000
714-B	90613459	MEJORA DE REGADIOS EN LOS LLANOS DE ARIDANE	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	64.531.712
714-B	90613460	MEJORA DE REGADIOS EN FRONTERA	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	20.000.000
714-B	90613461	MEJORA DE REGADIOS EN VALLEHERMOSO	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	3.500.000
714-B	90613462	MEJORA DE REGADIOS EN HERMIGUA	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	11.500.000
714-B	90613463	CAMINO DE STA. INES (BETANCURIA)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	17.815.306
714-B	90613464	REUTILIZACION DE AGUAS DEPURADAS (TELDE)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	60.000.000
714-B	90613465	REUTILIZ. AGUAS DEPUR.(AGUIMES,STA LUCIA E INGENIO)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	130.473.011
714-B	90613466	REGADIOS FINCA JUAN GRANDE (SAN BTME. DE TIRAJANA)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	38.000.000
714-B	90613467	REUTILIZACION AGUAS DEPURADAS (FIRGAS)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	21.526.989
714-B	90613469	CAMINO DE TINIZARA A LA COSTA (TIJARAFE)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	53.019.974
714-B	90713416	PAVIMENTACION ACCESO A LA COOPERATIVA (FUENCALIENTE)	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	6.827.000
714-D	90613614	INFRAEST. PORTUARIA DEL REFUGIO PESQUERO	TRANSFERENCIAS DE CREDIT	(51.968.000)

PROGRAMA	PI-LA	NOMBRE	TIPO DE MOFICACION	IMPORTE
714-D	90613618	INCIDENCIAS OBRAS DIVERSOS PUERTOS PESQUEROS	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	31.968.000
714-D	90713604	NAVE INDUSTRIAL INSTALACIONES DE FRIO R.P. LA RESTINGA	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	20.000.000
722-A	90715702	ELECTRIFICACION EN EL MEDIO RURAL. (DIVERSOS MUNICIPIOS)	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(100.000.000)
722-A	90715202	CENTROS ARTESANALES POLIVALENTES (VALLEHERMOSO)	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	2.000.000
731-A	90715402	ALLUMBRADOS PUBLICOS (VARIOS MUNICIPIOS)	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	100.000.000
731-A	90715702	ELECTRIFICACION EN EL MEDIO RURAL	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	100.000.000

CUADRO Nº 11 FUENTE: AUDIENCIA DE CUENTAS

GRADO DE EJECUCION DEL F.C.I. DE 1.990
POR SECCIONES PRESUPUESTARIAS (MILLONES PTAS.)

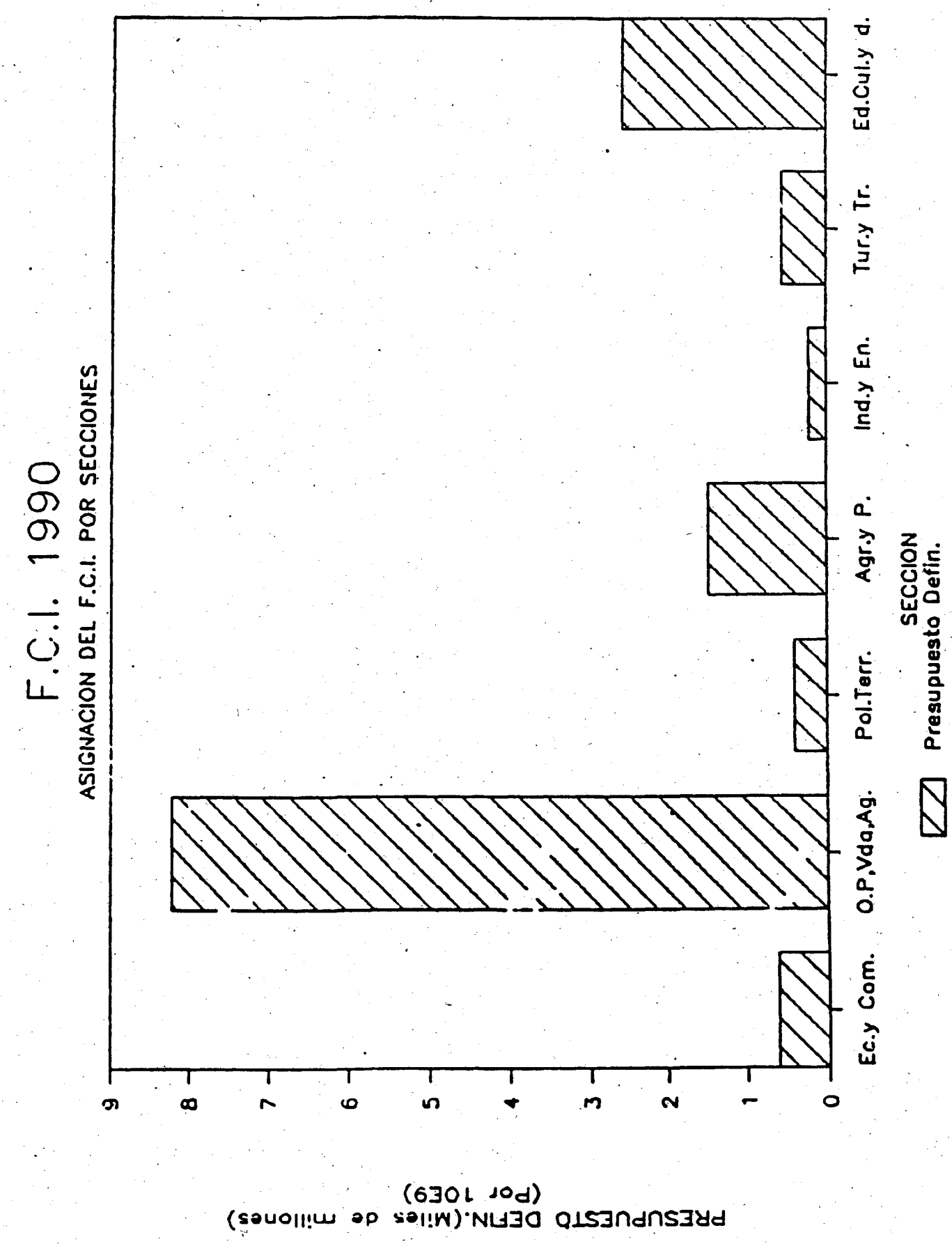
SECCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (2)	CREDITOS POR EJECUT (3)=(1)-(2)	% O. REC./ PTO. DEFINITIVO (4)=(2)/(1)*100	% PENDIENTE RECON PTO. DEFINITIVO (5)=(3)/(1) *100
09 ECONOMIA Y COMERCIO	610,00	600,00	10,00	98,36	1,64
11 OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUA	8.226,13	7.052,62	1.173,51	85,73	14,27
12 POLITICA TERRITORIAL	400,00	27,98	372,02	6,99	93,01
13 AGRICULTURA Y PESCA	1.471,64	181,32	1.290,32	12,32	87,68
15 INDUSTRIA Y ENERGIA	202,00	200,00	2,00	99,01	0,99
16 TURISMO Y TRANSPORTE	536,70	369,99	166,71	68,94	31,06
18 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	2.591,24	1.667,35	923,89	64,35	35,65
TOTAL	14.037,71	10.099,26	3.938,45	71,94	28,06

CUADRO Nº 12 FUENTE: AUDIENCIA DE CUENTAS

'LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LOS CREDITOS AFECTADOS A LOS DISTINTOS F.C.I.
'POR OPERACIONES REALIZADAS EN 1.990 (EN MILLONES DE PTAS.)

		MODIFICACIONES							
	CREDITO INICIAL	TRANFERENCIAS DE CREDITO (+)	(-)	INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO	CREDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIEN PAGO	REMANENTE CRED. DTVO.-(O. RECON.
F.C.I. 1.990	13.165,00	3.522,38	3.522,38	872,70	14.037,70	10.099,26	6.021,74	3.031,10	3.938,44
F.C.I. 1.989	3.259,56	554,93	554,67	0,00	3.259,56	2.325,16	1.559,62	635,75	934,40
F.C.I. 1.988	1.199,24	10,36	10,36	0,00	1.199,24	690,53	522,02	168,09	508,71
F.C.I. 1.987	476,94	0,00	0,00	0,00	476,94	223,63	209,42	4,94	253,31
F.C.I. 1.986	44,71	0,00	0,00	0,00	44,71	17,63	15,38	1,96	27,08
F.C.I. 1.985	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72
F.C.I. 1.984	320,23	0,00	0,00	0,00	320,23	0,00	0,00	0,00	320,23
F.C.I. 1.983	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

CUADRO Nº 13 FUENTE AUDIENCIA DE CUENTAS


F.C.I. 1990
ASIGNACION DEL F.C.I. POR SECCIONES
PRESUPUESTO DEFIN.(Miles de millones)
(Por 1OE9)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ec.y Com.
O.P,Vda,Ag.
Pol.Terr.
Agr.y P.
Ind.y En.
Tur.y Tr.
Ed.Cul.y d.
SECCION
Presupuesto Defin.

CLASIFICACION POR SECCIONES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EN EL EJERCICIO 1.990 (MILLONES DE PTAS.)

	9 ECONOMIA Y COMERCIO	11 OBRAS PUBLICAS VIVIENDA Y AGUA	12 POLITICA TERRITORIAL	13 AGRICULTUR Y PESCA	14 SANIDAD, T. Y SERVICIOS S.	15 INDUSTRIA Y ENERGIA	16 TURISMO Y TRANSPORTE	18 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	TOTAL
F.C.I. 1.990	600,00	7.052,62	27,99	181,31		200,00	369,99	1.667,35	10.099,26
F.C.I. 1.989		102,14	138,99	500,77	178,62		196,00	1.208,64	2.325,16
F.C.I. 1.988		136,05		214,94	70,83			268,71	690,53
F.C.I. 1.987		128,87		4,60	5,67	0,69	43,78	40,02	223,63
F.C.I. 1.986		0,00		3,01	0,00		0,00	14,62	17,63
F.C.I. 1.985		0,00			0,00			0,00	0,00
F.C.I. 1.984		0,00						0,00	0,00
F.C.I. 1.983			0,00						
TOTAL	600,00	7.419,68	166,98	904,63	255,12	200,69	609,77	3.199,34	13.356,21

CUADRO Nº 14 FUENTE: AUDIENCIA DE CUENTAS

PROGRAMA	P.I./L.A.	DENOMINACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO(1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS(2	PAGOS REALIZADOS(3)	GRADO DE EJECUCION(2:1)
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618313	16 UDS. E.G.B. Y RESIDENCIA SAN ANDRES	121.762.432	121.762.402	84.154.224	99,99997536
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618314	16 UDS. E.G.B. CUESTA CABALLERO	4.635.698	4.635.689	4.635.689	99,99980585
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618315	4-8 UDS. E.G.B. IGUESTE-SAN ANDRES	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618316	8 UDS. E.G.B. CRUZ DEL SEÑOR	25.165.000	23.813.515	0	94,62950527
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618317	8 UDS. E.G.B. EL CARDONAL	26.536.000	26.536.000	26.536.000	100
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618318	24 UDS. E.G.B. EN AÑAYA	92.835.555	92.835.555	43.300.160	100
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618319	16 UDS. E.G.B. PLAYA HONDA	70.486.543	70.486.543	0	100
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618320	8 UDS. E.G.B. LOS ABRIGOS	53.856.442	53.856.442	53.856.442	100
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618321	16 UDS. E.G.B. SAN GREGORIO	64.728.352	64.728.352	30.240.616	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618322	8 UDS. E.G.B. LAS MESAS	23.500.000	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618323	8-16 UDS. E.G.B. EL SOBRADILLO	57.025.594	56.459.525	14.354.686	99,01
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618324	8 UDS. E.G.B. PLAYA BLANCA	0	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618329	16 UDS. E.G.B. LOS GERANIOS-ARRECIFE	39.923.644	39.923.644	39.923.644	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618404	1.200 P.E. F.P. SALUD ALTO	111.498.265	111.498.265	56.944.140	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618405	840 P.E. F.P. LOS REALEJOS	50.000.000	50.000.000	32.686.967	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618406	9 UDS. F.P. GRANADILLA	0	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618407	840 P.E. F.P. MASPALOMAS	82.188.147	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618408	AMPLIACION F.P. TEROR	0	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618419	I.F.P. LA ISLETA-LAS PALMAS	30.000.000	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618503	24 UDS. BUP CASAS NUEVAS	70.304.000	70.304.000	41.600.108	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618504	24 UDS. BUP Y 24 UDS. E.G.B.	0	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618505	610 P.E. BUP CAPELLANIA	74.962.410	74.962.410	74.962.410	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618506	AMPLIACION I.B. LA ROCHA	45.169.772	17.192.117	0	38,06
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618507	360 P.E. DE BUP	95.000.000	95.000.000	0	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618508	I.B. DOMINGO RIVERO	127.943.714	127.943.714	57.469.376	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618511	960 P.E. B.U.P. ESCALERITAS	4.305.398	4.304.984	2.799.655	99,99
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618512	640 P.E. B.U.P. SAN CRISTOBAL	69.556.953	69.556.953	0	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618513	24 UDS. B.U.P. GUANARTEME	30.000.000	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618701	CENTRO DE PROFESORES PUERTO DEL ROSARIO	21.000.000	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618702	CENTRO DE PROFESORES SAN SEBASTIAN	21.000.000	1.750.000	0	8,33
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618703	CENTRO DE PROFESORES VALVERDE	21.000.000	19.000.000	0	90,48
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618704	CENTRO DE PROFESORES SUR DE TENERIFE	21.000.000	18.972.663	1.070.163	90,35
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	90618705	CENTRO DE PROFESORES DE ARRECIFE	25.000.000	1.587.441	1.587.441	6,35

PROGRAMA	P.I./L.A.	DENOMINACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO(1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS(2	PAGOS REALIZADOS(3)	GRADO DE EJECUCION(2:1)
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618706	CENTRO DE PROFESORES DE S.C. DE LA PALMA	25.000.000	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618804	INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCION	300.000.000	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618805	EQUIPAMIENTO DE CENTROS	258.152.066	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618J01	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SUR DE G.C.	20.000.000	17.860.000	0	89,30
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618J02	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SUR DE TENERIFE	20.000.000	18.800.342	1.700.342	94,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618J03	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PUERTO DEL ROSARIO	20.000.000	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618J04	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS S/C DE LA PALMA	20.000.000	1.750.000	0	8,75
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618J05	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ARRECIFE	20.000.000	1.244.388	1.244.388	6,22
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618J06	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN SEBASTIAN	15.350.000	0	0	0,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90618J07	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE VALVERDE	15.350.000	13.588.826	0	88,53
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90718301	CONVENIO AYUNTAM. 8 UDS. PLAYA BLANCA-YAIZA	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00
422D CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES	90718501	CONVENIO AYUNTAMIENTO YAIZA 360 P.E. BUP	0	0	0	0,00
431A VIVIENDA	90611301	OBRAS CONVENIO VISOCAN 1983	200.000.000	0	0	0,00
432A URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	90612217	ACTUACIONES EN BARRIOS MARGINALES	300.000.000	0	0	0,00
432A URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	90612227	REMODELACION DEL PASEO DE SAN JOSE	100.000.000	27.984.944	0	27,98
455A CULTURA	90717201	CREACION,REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES	257.250.000	257.250.000	143.649.399	100,00
455A CULTURA	90717201	CREACION,REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES	60.450.000	60.450.000	33.450.000	100,00
455A CULTURA	90717204	CASA DE LOS ARROYO	7.300.000	7.300.000	0	100,00
455A CULTURA	90717201	CREACION,REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100,00
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611206	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PLAYA BLANCA	154.420.000	154.420.000	87.352.107	100,00
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611217	SANEAMIENTO LAS MERCEDES-CANTERAS	36.486.110	36.289.991	36.289.991	99,46
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611218	ABASTECIMIENTO A GRANADILLA	29.855.220	29.855.220	29.855.220	100,00
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611219	E.D.A.R. SANTA CRUZ DE LA PALMA	60.000.000	60.000.000	0	100,00
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611223	INCIDENCIAS PROVINCIA DE STA CRUZ DE TENERIFE	658.670	0	0	0,00
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611227	INCIDENCIA PROVINCIA LAS PALMAS	235.580.000	233.619.733	0	99,17
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611228	OBRAS AGUA ENTRE DEPOSITOS (LAS PALMAS)	51.000.000	50.974.459	50.974.459	99,95
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611229	SUSTITUC.CONDUC.AGUA DE PTO. ROSARIO A CORRALEJO	100.000.000	0	0	0,00
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611230	PRONLONG.CANAL GARAFIA-TUNEL TIJARAFE-LOMO CAB	50.000.000	0	0	0,00
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	90611416	E.D.A.R. LAS PALMAS	340.000.000	340.000.000	216.863.019	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611112	AUTOPISTA GC-1	955.000.000	950.808.804	950.808.804	99,56
513A OBRAS PUBLICAS	90611122	RED SANTA CRUZ-LAGUNA (AVDA. MARITIMA)	350.500.000	341.500.000	245.708.495	97,43

PROGRAMA	P.I./L.A.	DENOMINACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO(1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS(2)	PAGOS REALIZADOS(3)	GRADO DE EJECUCION(2:1)
513A OBRAS PUBLICAS	90611128	AUTOPISTA TF-1	445.400.000	435.590.694	430.914.664	97,80
513A OBRAS PUBLICAS	90611169	NUEVA CARRET. CIRCUNV. PTO. CARMEN	401.500.000	399.999.912	398.496.799	99,63
513A OBRAS PUBLICAS	90611170	PUERTO DE GRAN TARAJAL	194.937.000	148.502.976	148.502.976	76,18
513A OBRAS PUBLICAS	90611171	RED ARTERIAL LAS PALMAS (PENETRAC. NORTE)	823.790.000	816.828.055	810.876.317	99,15
513A OBRAS PUBLICAS	90611173	VIA SERVICIO AUTOPISTA SUR DE TENERIFE	75.000.000	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611174	ENLACES DE EL TABLERO Y DESDOBLAMIENTO C-812	100.000.000	100.000.000	0	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611175	CONSTRUCCION VIA LENTA GC-200 (LAS PALMAS DE G.C.)	30.000.000	30.000.000	0	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611178	ENLACE SAN BENITO (LA LAGUNA)	19.303	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611179	GALERIA AVAN. TUNEL NUEVA CTRA. VALVERDE-FRONTERA	8.000.000	3.500.908	3.500.908	43,76
513A OBRAS PUBLICAS	90611180	AACONDICIO. C-830 DE S/C DE LA PALMA-PUNTAGORDA	18.000.000	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611181	PUERTO DE AGAETE	20.000.000	7.902.468	7.902.468	39,51
513A OBRAS PUBLICAS	90611182	ACONDICIONAMIENTO C-814 ARUCAS A TELDE	85.000.000	40.918.751	0	48,14
513A OBRAS PUBLICAS	90611183	ACONDICIONAMIENTO C-812 LAS PALMAS G.C. A MOGAN	25.000.000	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611184	ACONDICIONAMIENTO AVDA. MARITIMA DE LAS PALMAS	10.000.000	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611185	ENLACE RONDA DE ARRECIFE	13.292	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611186	CIRCURVALACION A TELDE	500.000	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611404	EXPROPIACIONES EN OBRAS DEL B.E.I.	200.000.000	200.000.000	88.137.170	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611405	VIA SANTA MARIA DEL MAR-LAS CHUMBERAS	900.000.000	900.000.000	550.000.000	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611406	VIA LOS GLADIOLOS-EL TABLERO	315.000.000	308.868.700	113.285.895	98,05
513A OBRAS PUBLICAS	90611407	CARRETERA YAIZA-PLAYA BLANCA	150.000.000	150.000.000	0	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611408	CARRETERA TENAGUA-LOS SAUCES	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611409	CARRETERA SAN SEBASTIAN-TUNEL DE LA CUMBRE	130.000.000	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611410	CARRETERA VALVERDE-SAN ANDRES	75.000.000	20.480.840	3.835.244	27,31
513A OBRAS PUBLICAS	90611411	AUTOPISTA PASITO BLANCO-ARGUINEGUIN	300.000.000	300.000.000	263.658.997	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	91611412	VIA DE RONDA À LA LAGUNA	275.000.000	275.000.000	0	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611413	CARRETERA LA OROTAVA-LOS REALEJOS	230.000.000	939.756	0	0,41
513A OBRAS PUBLICAS	90611414	CARRETERA POZO NEGRO-TARAJALEJO	150.000.000	150.000.000	0	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90611415	ACCESO A VALLE GRAN REY	0	0	0	0,00
513A OBRAS PUBLICAS	91611187	A.T., ESTUDIOS, REDACCION PROYECTOS Y DIREC. OBRAS	235.480.697	198.908.701	79.003.891	84,47
513A OBRAS PUBLICAS	90611188	ACTUACIONES PUNTUALES E INCIDENCIAS(DIVERSOS MUNICIPIOS)	214.986.708	214.986.708	160.392.000	100,00
513A OBRAS PUBLICAS	90711103	ACCESO AL PARADOR DE LAS PLAYAS (VALVERDE)	200.000.000	102.722.390	102.722.390	51,36

PROGRAMA	P.I./L.A.	DENOMINACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO(1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS(2)	PAGOS REALIZADOS(3)	GRADO DE EJECUCION(2:1)
513B ORDENACION Y APOYO AL TRANSPORTE	90616401	ESCUELA FORM. Y CAPAC. PROF. TRANSPORTISTA	0	0	0	0,00
513B ORDENACION Y APOYO AL TRANSPORTE	90616402	ESCUELA FORM. Y CAPAC. PROF. TRANSPORTISTA	100.000.000	0	0	0,00
513B ORDENACION Y APOYO AL TRANSPORTE	90616506	ESTACION DE GUAGUAS DE ARRECIFE	36.700.000	0	0	0,00
516A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	90616103	ACONDICIONAMIENTO VIAL-AEROCLUB	20.000.000	9.993.964	8.328.304	49,97
516A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	90716101	REMODELACION PLAYA DE LAS CANTERAS(LAS PALMAS DE G.C.)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
516A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	90716102	PLAYA PUNTA BRAVA (PTO. DE LA CRUZ)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
516A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	90716103	PASEO MARITIMO (SAN BARTOLOME DE TIRAJANA)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
516A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	90716104	INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN MUNICIPIOS	80.000.000	60.000.000	0	75,00
516A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	90716105	ACONDICIONAMIENTO VIAL-AEROCLUB	0	0	0	0,00
542B INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	90613203	AMPLIACION JARDIN BOTANICO (PTO. DE LA CRUZ)	100.000.000	5.103.835	0	5,10
622A COMERCIO Y CONSUMO	90709302	PLAN REGIONAL DE MERCADOS (DIVERSOS MUNICIPIOS)	460.000.000	460.000.000	29.367.610	100,00
622A COMERCIO Y CONSUMO	90709201	RECINTO FERIAL DE TENERIFE	80.000.000	70.000.000	0	87,50
622A COMERCIO Y CONSUMO	90709402	INSTITUCION FERIAL DE CANARIAS	70.000.000	70.000.000	23.559.480	100,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613406	MEJORA CAMINOS AGRICOLAS EN FUERTEVENTURA	42.184.694	32.314.342	0	76,60
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613407	REUTILIZACION DE AGUAS Y MEJORAS EN G.C.	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613408	MEJORA DE CAMINOS EN LANZAROTE	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613409	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN GRAN CANARIA	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613410	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN TENERIFE	614.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613411	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN EL HIERRO	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613412	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA PALMA	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613413	MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA GOMERA	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613414	MEJORA DE REGADIOS Y REUTILIZACION. AGUAS DEPURADAS	69.834.616	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613415	MEJORA DE REGADIOS EN EL HIERRO	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613416	MEJORA DE REGADIOS EN LA PALMA	87.376.314	35.576.976	5.562.277	40,72
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613417	MEJORA DE REGADIOS EN LA GOMERA	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613418	CAMINO BAHIA DE FORMA (SANTA LUCIA)	10.500.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613419	CAMINO EL TABLERO (MOYA)	13.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613420	CAMINO BARRIO EL RISCO (AGAETE)	5.000.000	1.404.017	0	28,08
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613421	CAMINO SAN ISIDRO MADRE DEL AGUA (TEROR)	12.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613422	CAMINO CUEVAS BLANCAS (TELDE)	10.500.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613423	CAMINO EL ROQUE-HOYA MARINA (VALSEQUILLO)	9.000.000	0	0	0,00

PROGRAMA	P.I./L.A.	DENOMINACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO(1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS(2)	PAGOS REALIZADOS(3)	GRADO DE EJECUCION(2:1)
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613424	CAMINO SAN JUAN (ARICO)	35.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613425	CAMINO LAS COLORADAS (GÜIMAR)	30.000.000	2.466.466	0	8,22
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613426	CAMINO ACCESO A JOVER (LA LAGUNA)	25.000.000	5.957.875	0	23,83
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613427	CAMINO IGUESTE A CRUZ COLORADA (CANDELARIA)	22.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613428	CAMINO LAS BARRERAS (EL ROSARIO)	12.000.000	2.098.843	0	17,49
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613429	CAMINO BILLETE,AGUA GARCIA,HOYA LOS LIRIOS(TEGUISE)	21.000.000	5.295.931	0	25,22
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613430	CAMINO LA BABOSERA (EL SAUZAL)	5.000.000	4.896.000	0	97,92
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613431	DIVERSOS CAMINOS (VALVERDE)	17.500.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613432	DIVERSOS CAMINOS (FRONTERA)	42.500.000	12.515.571	0	29,45
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613433	PISTA CATELA (GARAFIA)	16.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613434	DIVERSOS CAMINOS (TIJARAFE)	9.773.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613435	CAMINO ALMACEN DE RODRIGO (TAZACORTE)	6.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613436	CAMINO BARRANQUILLO-LAS LOMADAS Y EL TANQUE	14.000.000	2.289.066	0	16,35
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613437	CAMINO MONTE PUEBLO EL LINAR (MAZO)	9.400.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613438	PAVIMENTACION ACCESO COOPERATIVA FUENCALIENTE	0	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613439	PISTA A LA LOMADITA DE GALLEGOS (BARLOVENTO)	8.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613440	CAMINO MARTIN LUIS (PUNTALLANA)	10.000.000	10.000.000	0	100,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613441	DEPOSITO VALLE SAN LORENZO (ARONA)	41.551.384	14.212.628	0	34,20
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613442	PISTA TAMARGADA 2ª FASE (VALLEHERMOSO)	10.000.000	6.627.645	541.054	66,28
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613443	CAMINO LAS CABEZADAS (HERMIGUA)	20.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613444	PISTA LA VIZCAINA 2ª FASE (VALLE GRAN REY)	20.000.000	20.000.000	6.635.364	100,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613445	PISTA DE LAS YEDRAS (AGULO)	10.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613446	CAMINO ENTRE C. BAJAMAR Y MARTIN LUIS (PUNTALLANA)	40.000.000	8.000.000	0	20,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613455	MEJORA DE CAMINOS EN YAIZA	35.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613456	MEJORA DE CAMINOS SAN SAN BARTOLOME	25.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613457	MEJORAS DE CAMINOS RURALES EN TIAS	20.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613458	MEJORA DE REGADIOS EN PUNTAGORDA	10.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613459	MEJORA DE REGADIOS EN LOS LLANOS DE ARIDANE	64.531.712	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613460	MEJORA DE REGADIOS EN FRONTERA	20.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613461	MEJORA DE REGADIOS EN VALLEHERMOSO	3.500.000	3.500.000	0	100,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL	90613462	MEJORA DE REGADIOS EN HERMIGUA	11.500.000	0	0	0,00

PROGRAMA	P.I./L.A.	DENOMINACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO(1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS(2)	PAGOS REALIZADO(3)	GRADO DE EJECUCION(2:1)
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA	90613463	CAMINO DE SANTA INES (BETANCURIA)	17.815.306	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA	90613464	REUTILIZACION DE AGUAS DEPURADAS (TELDE)	60.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA	90613465	REUTILIA. AGUAS DEPUR. (AGUIMES, STA LUCIA E INGENIO)	130.473.011	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA	90613466	REGADIOS FINCA JUAN GRANDE (SAN BTME. DE TIRAJANA)	38.000.000	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA	90613467	REUTILIZACION AGUAS DEPURADAS (FIRGAS)	21.526.989	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA	90613469	CAMINO DE TINIZARA A LA COSTA (TIJARAFE)	53.091.974	0	0	0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA	90713416	PAVIMENTACION ACCESO A LA COOPERATIVA (FUENCALIENTE)	6.827.000	0	0	0,00
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	90613606	LOCAL SOCIAL,ALMACEN DE PERTRECHOS Y DEPEND. D.G. PESCA	24.669.000	0	0	0,00
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	90613611	DOTACIONES Y SERVICIOS EN LA SANTA (TINAJO)	3.000.000	0	0	0,00
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	90613612	DOTACIONES Y SERVICIOS EN EL REFUGIO PESQUERO DE AGAETE	25.000.000	0	0	0,00
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	90613613	DOTACIONES Y SERVICIOS EN SAN CRISTOBAL (LAS PALMAS G.C.)	10.000.000	2.825.229	499.684	28,25
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	90613614	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL REFUGIO PESQUERO (LA PALMA)	0	0	0	0,00
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	90613618	INCIDENCIAS OBRAS DIVERSAS PTOS PESQUEROS	31.968.000	6.223.390	0	19,47
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	90613619	NAVE INDUSTRIAL INSTALACION DE FRIO LA RESTINGA	0	0	0	0,00
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA	90713604	NAVE INDUSTRIAL-INSTALACIONES DE FRIO R.P. LA RESTINGA	20.000.000	0	0	0,00
714E DESARROLLO PESQUERO Y FORMAC. PROFES. PESQUE	90613803	CENTRO F.P. NAUTICO-PESQUERO	55.000.000	0	0	0,00
722A PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL ARTESANA	90715702	ELECTRIFICACION EN EL MEDIO RURAL (DIVERSOS MUNICIP.)	0	0	0	0,00
722A PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL ARTESANA	90715202	CENTROS ARTESANALES POLIVALENTES (VALLEHERMOSO)	2.000.000	0	0	0,00
731A DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO	90715402	ALUMBARADOS PUBLICOS (DIVERSOS MUNICIPIOS)	100.000.000	100.000.000	0	100,00
731A DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO	90715702	ELECTRIFICACION EN EL MEDIO RURAL (DIVERSOS MUNICIP.)	100.000.000	100.000.000	0	100,00

CUADRO Nº 16 FUENTE: AUDIENCIA DE CUENTAS

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

INFORME DE FISCALIZACION
EJERCICIO 1990

TOMO II
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (FCI)
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

MANUEL BURQUE TORREIRA, SECRETARIO GENERAL DEL CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA.

CERTIFICA:

Que este TOMO II consta de 216 páginas numeradas correlativamente y que los informes de fiscalización en el contenidos fueron aprobados por el pleno del Consello de Contas de Galicia, en las sesiones celebradas los días dos y veintidós de diciembre de 1.992.

Santiago de Compostela, 20 de enero de 1,993

VQ BQ

EL CONSELLEIRO MAYOR

Fdo.: Carlos G. Otero Díaz

ÍNDICE

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. F.C.I.-

1.- Introducción
- 1.1.- Marco Legal del Fondo de Compensación Interterritorial
- 1.2.- Bases Legales de actuación del Consello de Contas

2.- Objetivos y alcance del Control realizado

3.- Metodología
- 3.1.- Período de ejecución
- 3.2.- Determinación del grado de ejecución
- 3.3.- Descripción del trabajo realizado

4.- Análisis del Grado de Ejecución
- 4.1.- Ejecución en el ejercicio 1990 de los proyectos de inversión financiados con F.C.I., dotados en ejercicios anteriores.(Cuadro nº 1)
- 4.2.- Ejecución en el ejercicio 1990, de los proyectos de inversión financiados con el F.C.I. de 1990
  - 4.2.1.- Dotación inicial del F.C.I. del ejercicio 1990
  - 4.2.2.- Modificaciones producidas en las dotaciones iniciales del F.C.I. 1990, consignadas en los Presupuestos de la Comunidad de Galicia para 1990
  - 4.2.3.- Grado de ejecución de los Proyectos de Inversión de la Comunidad Autónoma de Galicia.(Cuadro nº 2)
    - 4.2.3.1.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.(Cuadros nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
    - 4.2.3.2.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria (Cuadros nºs 10, 11, 12 y 13)
    - 4.2.3.3.- Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes (Cuadro nº 14)
    - 4.2.3.4.- Consellería de Sanidad. (Cuadros nºs 15, 16 y 17)
    - 4.2.3.5.- Resumen General del Grado de Ejecución. Ejercicio Corriente 1990. (Cuadro nº 18)
    - 4.2.3.6.- Liquidación Presupuestaria de Ejercicios Anteriores Resultas de Pagos.(Cuadro nº 19)
    - 4.2.3.7.- Conclusiones
- 4.3.- Percepción de las dotaciones del F.C.I
  - 4.3.1.- Petición de Fondos a la Administración Central
  - 4.3.2.- Ingresos del F.C.I. en el ejercicio 1990
- 4.4.- Resultado del F.C.I. en el ejercicio económico 1990.(Superávit de Gestión y Déficit de Caja)

5.- Contratación Administrativa
- 5.1.- Consellería de la Presidencia y Administración Pública
- 5.2.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas
- 5.3.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria
- 5.4.- Consellería de Industria y Comercio
- 5.5.- Consellería de Trabajo y Servicios Sociales
- 5.6.- Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes
- 5.7.- Consellería de Cultura y Juventud
- 5.8.- Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
- 5.9.- Consellería de Sanidad
- 5.10.- Consellería de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno
- 5.11.- Recomendaciones a la Contratación Administrativa

6.- Evaluación del Control Interno:Puntos Débiles y Recomendaciones
- 6.1.- Dotaciones iniciales del F.C.I. de 1990
- 6.2.- Modificaciones de proyectos
- 6.3.- Control sobre el grado de ejecución de los proyectos
- 6.4.- Percepción de las dotaciones del F.C.I
- 6.5.- Contabilización de los ingresos
- 6.6.- Formalización de documentos contables
- 6.7.- Ajustes de la Liquidación Presupuestaria

7.- Opinión Final

8.- Alegaciones
- 8.1.- Alegaciones de la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma)

8.2.- Puntualizaciones a las alegaciones formuladas por la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma

Anexos (Anexo I, I1, I2, I3, II, II1, III y IV)

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. FEDER.-

1.- Introducción.Fondos Estructurales

1.1.- Marco Legal del FEDER

1.2.- Bases Legales de actuación del Consello de Contas

2.- Objetivos y alcance del control realizado.

3.- Metodología

3.1.- Período de ejecución

3.2.- Determinación del grado de ejecución

3.3.- Descripción del trabajo realizado

4.- Análisis del grado de ejecución

4.1.- Ejecución en el ejercicio 1.990 de los proyectos de inversión financiados con el FEDER de 1.990

4.1.1.- Dotación inicial del FEDER en el ejercicio 1990

4.1.2.- Modificaciones producidas en las dotaciones iniciales del FEDER-1990

4.1.3.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.(Cuadros números 1, 2 y 3)

4.1.4.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. (Cuadros números 4 y 5)

4.1.5.- Consellería de Industria y Comercio

4.1.6.- Consellería de Sanidad.(Cuadro nº 6)

4.1.7.- Resumen General del Grado de Ejecución.(Cuadro nº 7)

4.1.8.- Conclusiones

4.2.- Percepción de las dotaciones del FEDER

4.2.1.- Petición de Fondos a la Administración Central

4.2.2.- Ingresos del FEDER en el ejercicio 1990

4.3.- Resultado del FEDER en el ejercicio económico 1990.(Superávit de Gestión y de Caja)

5.- Contratación Administrativa

5.1.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas

5.2.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria

5.3.- Consellería de Industria y Comercio

5.4.- Consellería de Sanidad

5.5.- Recomendaciones a la contratación administrativa

6.- Evaluación del control interno

6.1.- Puntos Débiles y Recomendaciones

6.2.- Ajustes de la Liquidación Presupuestaria

7.- Opinión Final

8.- Alegaciones

8.1.- Alegaciones de la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma)

8.2.- Puntualizaciones a las alegaciones formuladas por la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma)

Anexo V

FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (FCI)

1.- INTRODUCCIÓN.-

1.1.- Marco legal del Fondo de Compensación Interterritorial.-

La Constitución española en el artículo 158, apartado 2, establece que:

"Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y Provincias, en su caso".

Las transferencias correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial (en adelante F.C.I. o Fondo), deben contemplarse, pues, entre los Recursos de las Comunidades Autónomas, tal como viene expresamente recogido en el artículo 157.1.C de nuestra Constitución, que dice:

"Los Recursos de las Comunidades Autónomas, estarán constituidos por:

c) Transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo la los Presupuestos Generales del Estado".

Por otra parte, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), desarrolla en su artículo 16 el mandato constitucional, señalando los principios generales que han de configurar al mencionado Fondo, que se destinará a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados con el fin de equilibrar y armonizar el desarrollo regional.

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del Fondo de Compensación Interterritorial (B.O.E., núm. 80 de 3 de abril), da forma definitiva a su contenido y regulación.

Asimismo, también es de aplicación la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial, que entro en vigor el día siguiente de su publicación en el B.O.E. (28-12-1990), indicándose en su disposición final que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 1990.

Las dotaciones del F.C.I., correspondientes al ejercicio 1990, están establecidas en la Ley 4/1990, del 30 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (B.O.E., núm.156 de 30 de junio de 1990), regulando su artículo 79 al F.C.I. y compensación transitoria para el ejercicio 1990, figurando la dotación de los créditos en la Sección 33.

1.2.- Bases legales de actuación del Consello de Contas.-

La Ley 7/1984 del F.C.I., dedica su artículo 11 al "Control Parlamentario", y establece en el apartado 1 de dicho artículo lo siguiente:

1.-"El Control parlamentario de los proyectos de inversión financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, tanto si se trata de los efectuados por la Administración Central como por la Autonómica, se llevará a cabo por las Cortes Generales y por las Asambleas Legislativas de las respectivas Comunidades Autónomas. Para ello se constituirá en el Senado una Comisión de Seguimiento Permanente".

La actuación del Consello de Contas, se justifica en el apartado 2 del mencionado artículo 11:

2.- "No obstante, el Tribunal de Cuentas del Estado, y, en su caso, los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas, presentarán ante las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, respectivamente, informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial".

El preámbulo de la Ley 7/1984, dice lo siguiente: "En cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la presente Ley establece un mecanismo de control parlamentario, en virtud del cual el Tribunal de Cuentas y, en su caso, los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas, presentarán ante las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las respectivas Comunidades Autónomas, informe separado y suficiente acerca del grado de ejecución de los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial".

El citado apartado 4 del artículo 16 de la LOFCA, establece lo siguiente:

"Cada territorio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, así como del estado de realización de los proyectos que con cargo al mismo están en curso de ejecución".

Con objeto de permitir el control parlamentario, dice el apartado 3 del artículo 11 de la Ley del F.C.I., que:

"... las Administraciones competentes que efectúen gastos con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial deberán contabilizar analíticamente los costes imputables a cada proyecto, así como las unidades físicas de realización del mismo que resulten más significativas".

2.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CONTROL REALIZADO.-

El control realizado por este Consello de Contas tiene como objetivo dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 11.2., de la Ley del F.C.I., es decir, presentar un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con el F.C.I.

El articulado de la Ley del F.C.I. no recoge el contenido concreto del informe, ya que, en el preámbulo de dicha Ley se especifica que el informe deberá versar sobre el grado de ejecución de los proyectos, puntualización que va en línea con el artículo 16.4 de la LOFCA, que establece que la rendición de cuentas versará sobre el destino de los recursos del F.C.I. y el estado de realización de los proyectos.

En este sentido, los objetivos y el alcance del presente informe son los siguientes:

Objetivo nº 1.-

Verificar y evaluar el grado de cumplimiento legal de la contratación administrativa de los proyectos financiados con el F.C.I., analizando:

- La autorización del expediente y el Sistema de Contratación.
- Pliego de Cláusulas Administrativas y Resolución Aprobatoria del mismo.
- Informe de la Asesoría Jurídica.
- Certificación de existencia de crédito.
- Propuesta de Gasto y Fiscalización de la Intervención.
- Convocatoria de la Contratación.
- Acta de la Mesa de Contratación.
- Documentación de las Empresas presentadas.
- Resolución de Adjudicación.
- Contrato Administrativo.
- Fianza Definitiva.
- Acta de Replanteo.
- Actas de Recepción Provisional y Definitiva.

Verificar y evaluar el grado de ejecución de los proyectos financiados con el F.C.I., analizando:

- Las modificaciones de proyectos.
- La ejecución por programas de inversión.
- La regularidad contable de los créditos del F.C.I., comprobando la adecuada imputación contable al período y concepto que les corresponden.
- La regularidad legal de las actuaciones realizadas por los gestores del F.C.I., atendiendo fundamentalmente a la contratación administrativa y a la naturaleza de los gastos realizados, análisis de las modificaciones, aplicación de la contabilidad financiera y analítica a los proyectos del F.C.I., y cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.
- Los ingresos provenientes del F.C.I.
- Cofinanciación con FEDER y fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Objetivo nº 2.-

Evaluar el control interno de la Administración de la Xunta de Galicia en lo que respecta a la coordinación, control y seguimiento del F.C.I.

Alcance.-

El presente informe abarca los proyectos de inversión que en el ejercicio 1990, están financiados con cargo al F.C.I., dotado éste en el ejercicio 1990, en el ejercicio 1989 o en otros anteriores.

3.- METODOLOGÍA.-

3.1.- Período de ejecución.-

La dotación del F.C.I., tal como se ha descrito en el apartado 1.1. de este informe, es anual, quedando determinada en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley del F.C.I., considera un período bianual para la ejecución de los proyectos de inversión financiados con dicho fondo, ya que en su artículo 12.1 se establece que:

"Los remanentes de créditos no comprometidos, correspondientes a proyectos de inversión financiados con cargo a la dotación del Fondo de

Compensación Interterritorial asignada a una Comunidad Autónoma en materias de su competencia, se incorporarán en el ejercicio inmediato posterior a los créditos del Fondo de Compensación Interterritorial de esa Comunidad Autónoma en las mismas materias.

Si al finalizar este último ejercicio persistieran tales remanentes no comprometidos, éstos se incorporarán al Fondo de Compensación Interterritorial del siguiente ejercicio con destino a proyectos de la competencia de la Administración del Estado a realizar en el ámbito de dicha Comunidad Autónoma".

Paralelamente, el apartado 2 establece que los remanentes de créditos no comprometidos al finalizar el segundo ejercicio del bienio, correspondientes a proyectos de inversión financiados con cargo a la dotación del F.C.I., asignado a una Comunidad Autónoma en materias de competencias del Estado, se incorporarán en el ejercicio inmediato posterior a los créditos del Fondo de Compensación Interterritorial de esa Comunidad Autónoma. .

"Si al finalizar este último ejercicio persistiesen tales remanentes, éstos se incorporarán al Fondo de Compensación Interterritorial del siguiente ejercicio, con destino a proyectos de competencia de la respectiva Comunidad Autónoma que ésta decida realizar".

Sin embargo, estas disposiciones de la Ley del F.C.I., han sido modificadas desde el ejercicio 1988, ya que el artículo 121.3 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988 autorizó que los remanentes de crédito del F.C.I., de ejercicios anteriores se incorporaran al presupuesto de 1988 a disposición de la misma Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 1987. Asimismo la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 prorroga a dicho ejercicio el criterio establecido por la Ley anterior, y el artículo 79.4., de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 establece que los remanentes de crédito del Fondo de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores se incorporarán al presupuesto de 1990 a disposición de la misma Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 1989.

3.2.- Determinación del grado de ejecución.-

La normativa legal que regula el F.C.I. no define el concepto de grado de ejecución, nivel de realización o grado de cumplimiento de los proyectos de inversión. La trascendencia que este concepto tiene para el establecimiento y evaluación del nivel de cumplimiento de la normativa reguladora aconseja mencionar el significado que a efectos del presente informe se le atribuyen.

La noción del grado de ejecución corre pareja al desarrollo o avance de los proyectos de inversión, de tal modo que su cuantificación irá aumentando progresivamente a medida que se cubran las diferentes fases presupuestarias. Existen distintos niveles de cuantificación del grado de ejecución en función de la fase presupuestaria en la que para ello nos situemos. La decisión que se expone es la de establecer cual de estos niveles de cuantificación resulta pertinente considerar en cada ocasión. En los párrafos siguientes se comentan brevemente aquellos niveles de cuantificación del grado de ejecución que se estima, pueden resultar significativos para los objetivos del presente informe.

Tomando como punto de referencia el artículo 12, apartado 1, de la Ley del Fondo, se puede definir una primera cuantificación del grado de ejecución, identificándolo con los créditos comprometidos en proyectos de inversión financiados con cargo a las dotaciones del F.C.I.

En la contabilidad de los gastos públicos, el término créditos comprometidos equivale a los compromisos contraídos con cargo a los créditos del presupuesto de gastos, créditos que, en definitiva, deben encontrarse en la fase contable D (Disposición). Esta interpretación aparece claramente recogida en la nueva versión del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Resolución de 11 de noviembre de 1983 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Las obligaciones reconocidas constituyen el segundo nivel de cuantificación del grado de ejecución, y se corresponden con los créditos que se encuentran en la fase contable O (Obligación), que posteriormente dará lugar a la emisión de la propuesta de pago (Fase K).

Finalmente, una tercera cuantificación del grado de ejecución se identificaría con la situación de pagado u ordenado el pago, que se traduce en la fase contable P.

En este informe se muestra la cuantificación que consideramos más significativa de los créditos, en sus fases de obligaciones reconocidas y pagos ordenados, por proyectos financiados con las dotaciones del F.C.I., al 31 de diciembre de 1990, de conformidad con el artículo 54.3 y 54.4, de la Ley 3/1984, de 3 de abril, de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia que establece:

"54.3.- El reconocimiento de la obligación, que es la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Comunidad de Galicia, que deban acreditarse como contraprestación económica derivada de los acuerdos, conciertos o normas resolutorias que determinen la disposición de un crédito, una vez realizada y justificada adecuadamente la correspondiente prestación y efectuada la pertinente liquidación.

54.4.- La ordenación del pago, que es la operación en virtud de la cual el ordenador competente expide, considerada la existencia de una obligación reconocida y concreta, la orden de pago contra la Tesorería de la Comunidad a favor del respectivo acreedor".

Asimismo, se incluyen igualmente los "importes solicitados" por la Xunta de Galicia a la Administración Central como consecuencia de los pagos realizados por ésta con motivo de la ejecución de las obras y suministros, para que esta última los reembolse en los términos fijados en el artículo 10.2., de la Ley 7/1984 del F.C.I., que establece:

"Tanto los órganos gestores de la Administración Central, como las Comunidades Autónomas, de conformidad con los créditos cuya gestión tienen, respectivamente, encomendada, dispondrán de la Tesorería correspondiente a los mismos por cuartas partes, efectuándose los oportunos libramientos dentro de los quince primeros días de cada trimestre por el servicio mencionado en el apartado anterior, previa solicitud en la que se relacionen los datos relativos a las obras ejecutadas, adquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas en el trimestre inmediatamente anterior. Del importe correspondiente a cada libramiento trimestral se deducirán las cantidades transferidas en el trimestre inmediato anterior que no hayan sido utilizadas para satisfacer inversiones efectivas".

Los importes solicitados se refieren a las peticiones de fondos realizadas por la Comunidad de Galicia a la Administración Central, que se analizan en este informe en el apartado 4.3.1.- Petición de Fondos a la Administración Central.

Con toda esta información, se estima que se ofrece una visión lo suficientemente ajustada al desarrollo de la ejecución financiera del F.C.I., correspondiente a la Comunidad de Galicia, al 31 de diciembre de 1990.

3.3.- Descripción del trabajo realizado.-

El Consello de Contas, con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el apartado 2 de este informe, ha aplicado los procedimientos y llevado a cabo las pruebas de auditoría que ha estimado precisas y adecuadas a las circunstancias y al alcance del control realizado.

El trabajo se ha desarrollado recabando la documentación pertinente y realizando visitas a las Consellerías de la Presidencia y Administración Pública - Ordenación del Territorio y Obras Públicas (incluido el I.G.V.S.) - Educación y Ordenación Universitaria - Industria y Comercio - Trabajo y Servicios Sociales - Agricultura, Ganadería y Montes - Cultura y Juventud - Pesca, Marisqueo y Acuicultura - Sanidad y Relaciones Institucionales.

Los procedimientos seguidos y las pruebas realizadas consistieron fundamentalmente, en lo siguiente:

1°).- Evaluación del control interno en lo que se refiere al seguimiento del F.C.I., por parte de la Administración de la Xunta de Galicia, fundamentalmente en la contratación administrativa, y en los instrumentos de coordinación y control existentes y en la fluidez y calidad de la información que se genera.

2°).- Verificación de la dotación inicial incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 1990 como F.C.I. y compensación transitoria para la Comunidad Gallega y la que figura en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia para el mismo período, analizando posteriormente si han tenido lugar modificaciones que hicieran variar la mencionada dotación inicial y la revisión con su correspondiente documentación soporte en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales establecidos. (apartado 4° del artículo 7° de la Ley 7/1984 del F.C.I.).

3°).- Solicitar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia la relación individualizada de los proyectos de inversión financiados con recursos del F.C.I., en el Presupuesto de 1990, con el detalle de su grado de ejecución al final del ejercicio y la relación individualizada de los ingresos recibidos de la Administración Central durante 1990, correspondientes al F.C.I. del ejercicio presupuestario 1990 y ejercicios anteriores (incluidas las entregas a cuenta).

4°).- Comprobar con el Libro Mayor de la Contabilidad Presupuestaria y con el Libro de Liquidación del Presupuesto, la fase contable en la que se encontraban los proyectos de inversión al 31 de diciembre de 1990.

5°).- Analizar las variaciones producidas entre los proyectos de inversión iniciales que se incluían en la "Relación de proyectos que integran el Fondo de Compensación Interterritorial en la Comunidad Gallega", que figura en el Anexo de la Sección 33 de la Ley 4/1990 del 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (articulo 79 de la citada Ley), y los finalmente ejecutados por la Comunidad Autónoma de Galicia.

6°).- Analizar una muestra de proyectos de inversión con el objeto de verificar la existencia y adecuación de la documentación justificativa de la ejecución presupuestaria, en las fases de créditos comprometidos, obligaciones reconocidas y pagos realizados. La muestra auditada fue del 39% de las aplicaciones presupuestarias y del 66% del importe presupuestario.

7°).- Obtener los "importes solicitados" por la Administración Autonómica a la Dirección general de Coordinación de las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de percibir las dotaciones del F.C.I. que corresponden a la Comunidad Gallega, y analizar la correspondiente documentación soporte.

8°).- Verificar los importes reembolsados por la Administración Central con la documentación soporte de éstos, y su correcta contabilización por parte de la Administración de la Comunidad de Galicia.

9°).- Comparar los pagos realizados por la Administración Autonómica en el año 1990 con los solicitados a la Administración Central a efectos de la percepción de las correspondientes dotaciones.

10°).- Analizar el tiempo transcurrido entre la fecha de tramitación de la solicitud por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma a la Central y la fecha efectiva del reembolso.

4.- ANÁLISIS DEL GRADO DE EJECUCIÓN.-

4.1.- Ejecución en el ejercicio 1990 de los proyectos de inversión financiados con el F.C.I. dotados en ejercicios anteriores. (Cuadro n° 1).-

La liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia del ejercicio 1990 comprende proyectos de inversión financiados con el F.C.I. dotado en el ejercicio 1990 e incorporaciones de créditos de ejercicios anteriores desde 1983.

El análisis de los proyectos financiados con el F.C.I. de 1990 se realiza en el apartado siguiente de este informe.

En el cuadro n° 1 se muestra un resumen de las inversiones financiadas con el F.C.I. de ejercicios anteriores a 1990 correspondientes al Presupuesto de 1990 (incorporaciones de créditos del ejercicio anterior y generaciones de créditos).

F.C.I. dotado en ejercicios anteriores a 1990.

Situación a 31-12-1990.

RESUMEN POR CONSELLERÍAS Y PROGRAMAS DE LA EJECUCIÓN DEL F.C.I. DE EJERCICIOS ANTERIORES A 1.990

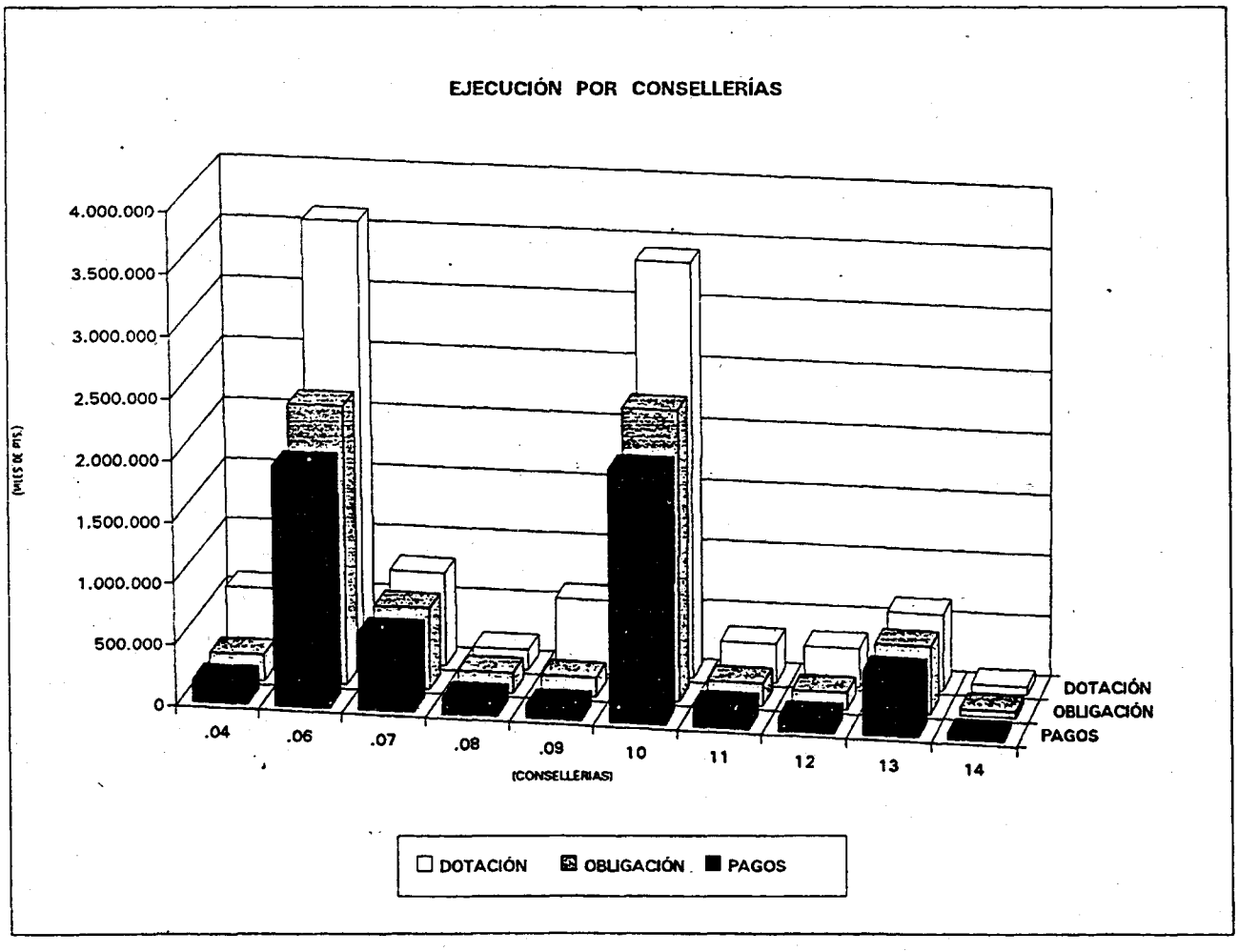
(en miles de pesetas)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
04.11.121A.68	105.884	0	0,00%	0	0,00%
04.13.356A.68	386.748	206.200	53,32%	176.144	45,54%
04.14.651A.68	85.860	11.330	13,20%	10.165	11,84%
Total C. Presidencia y Admón. Pública	**578.492**	**217.530**	**37,60%**	**186.309**	**32,21%**
06.02.332A.68	221.113	31.131	14,08%	16.045	7,26%
06.02.342A.68	137.183	104.023	75,83%	78.352	57,11%
06.04.412A.68	518.619	423.477	81,65%	402.124	77,54%
06.04.413B.68	449.253	312.265	69,51%	77.259	17,20%
06.04.414A.68	5.060	3.611	71,36%	2.000	39,53%
06.05.413A.68	153.621	148.438	96,63%	148.438	96,63%
Suma sin org. autónomos	1.484.849	1.022.945	68,89%	724.218	48,77%
06.50.331A.68	2.139.935	1.269.424	59,32%	1.244.086	58,14%
06.50.332A.68	244	161	65,98%	161	65,98%
Total C.O.T.O.P.	**3.625.028**	**2.292.530**	**63,24%**	**1.968.465**	**54,30%**
07.01.322A.68	425.530	367.874	86,45%	334.594	78,63%
07.01.322B.68	149.589	136.341	91,14%	135.526	90,60%
07.01.322C.68	148.459	120.973	81,49%	120.973	81,49%
07.01.322E.68	53.350	44.385	83,20%	44.385	83,20%
Total C. Educación y Ord. Universitaria	**776.928**	**669.573**	**86,18%**	**635.478**	**81,79%**
08.02.342A.68	15.240	15.240	100,00%	15.240	100,00%
08.02.622A.68	67.779	66.719	98,44%	59.961	88,47%
08.02.641A.68	86.389	84.214	97,48%	65.072	75,32%
Total C. Industria y Comercio	**169.408**	**166.173**	**98,09%**	**140.273**	**82,80%**
09.02.214B.68	47.760	8.884	18,60%	8.083	16,92%
09.03.212B.68	561.544	151.776	27,03%	108.824	19,38%
Total C. Trabajo y Serv. Sociales	**609.304**	**160.660**	**26,37%**	**116.907**	**19,19%**
10.02.322G.68	45.936	44.530	96,94%	44.530	96,94%
10.02.421A.68	1.893.319	1.392.064	73,53%	1.178.395	62,24%
10.02.612A.68	164	0	0,00%	0	0,00%
10.03.432A.68	45.431	42.719	94,03%	42.719	94,03%
10.03.613A.68	42.119	38.200	90,70%	36.668	87,06%
10.03.614A.68	159.645	74.585	46,72%	54.818	34,34%
10.04.422A.68	291.796	115.841	39,70%	87.781	30,08%
10.04.422C.68	1.177	1.177	100,00%	1.177	100,00%
10.04.614A.68	782.461	591.827	75,64%	553.003	70,67%
10.02.421A.76	137.808	79.344	57,58%	64.196	46,58%
Total C. Agricultura, Ganadería y Montes	**3.399.856**	**2.380.287**	**70,01%**	**2.063.287**	**60,69%**
11.02.354A.68	178.448	76.825	43,05%	72.113	40,41%
11.03.352B.68	41.649	39.421	94,65%	39.421	94,65%
11.03.357A.68	67.506	56.902	84,29%	48.487	71,83%
11.04.356B.68	32.856	12.961	39,45%	12.478	37,98%
Total C. Cultura y Juventud	**320.459**	**186.109**	**58,08%**	**172.499**	**53,83%**

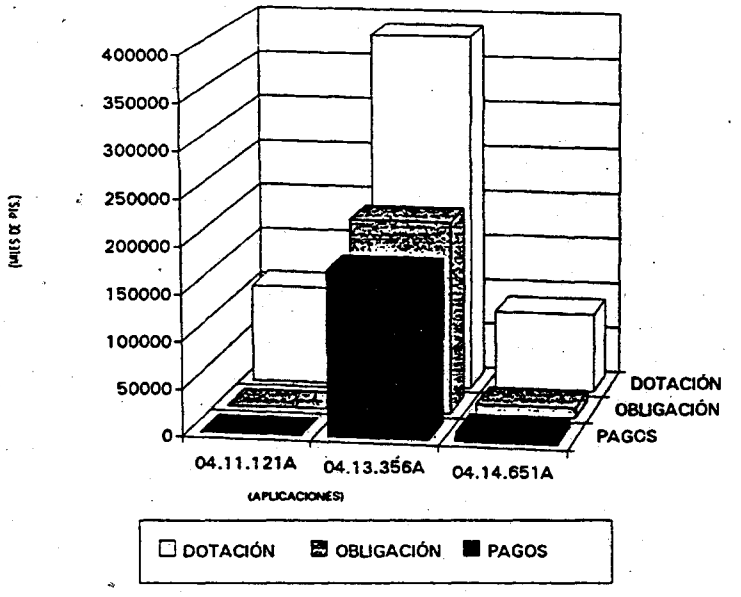
Cuadro nº 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
12.01.614B.68	32.839	0	0,00%	0	0,00%
12.04.614B.68	36.582	14.059	38,43%	12.054	32,95%
12.05.614B.68	8.301	7.165	86,31%	7.165	86,31%
12.06.322G.68	130.969	21.305	16,27%	0	0,00%
12.06.612B.68	102.914	102.901	99,99%	102.901	99,99%
Total C. Pesca,Marisqueo y Acuicultura	**311.605**	**145.430**	**46,67%**	**122.120**	**39,19%**
13.05.312A.68	324.818	307.409	94,64%	284.129	87,47%
13.05.313A.68	302.898	245.355	81,00%	232.375	76,72%
Total C. de Sanidad	**627.716**	**552.764**	**88,06%**	**516.504**	**82,28%**
14.02.361B.68	68.081	55.819	81,99%	49.920	73,32%
Total C. Relaciones Institucionales	**68.081**	**55.819**	**81,99%**	**49.920**	**73,32%**

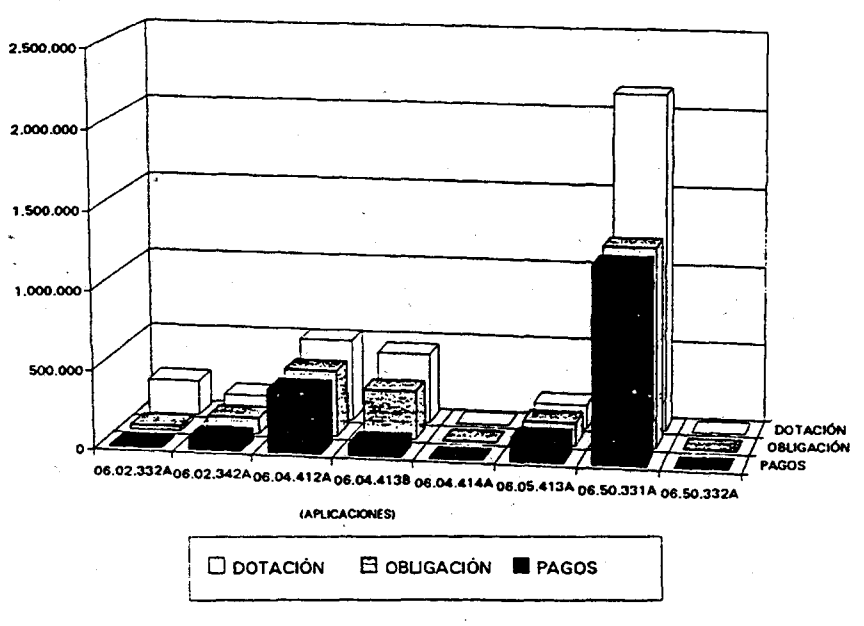
TOTAL GENERAL	10.486.877	6.826.875	65,10%	5.971.762	56,95%

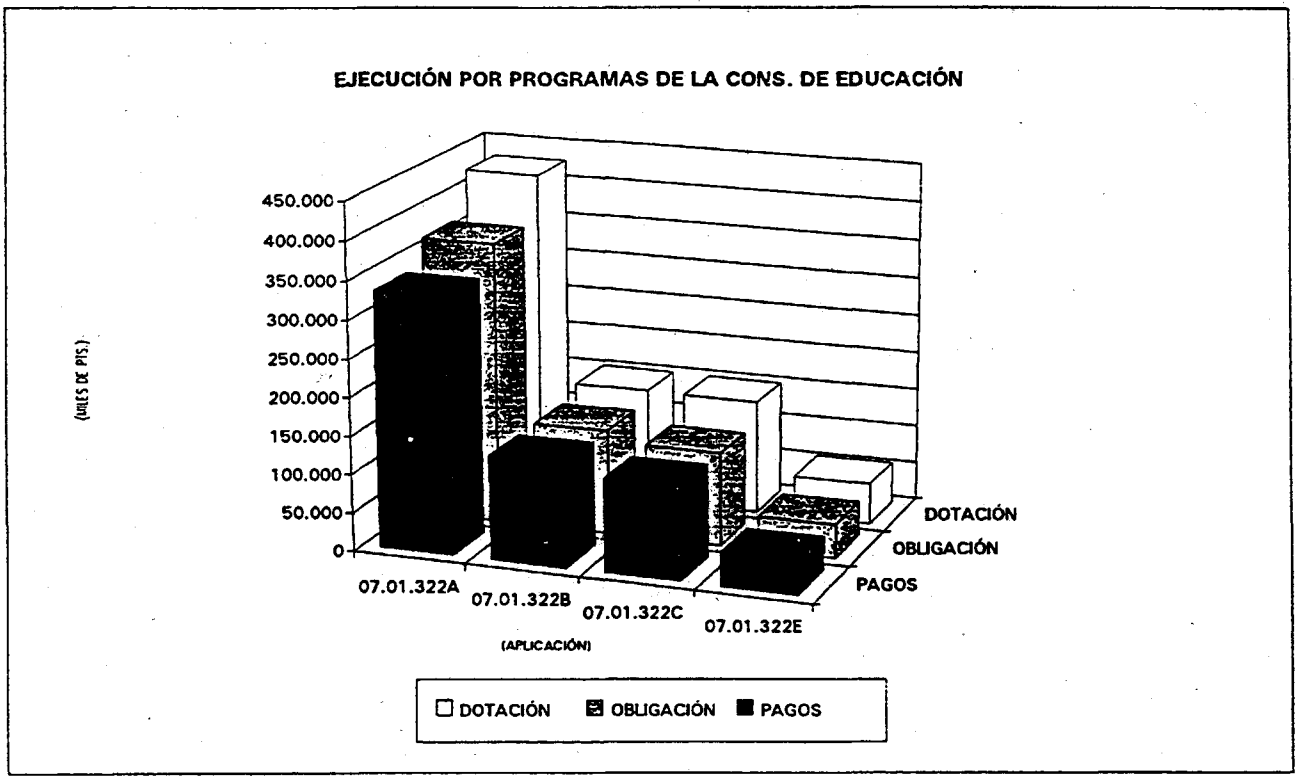


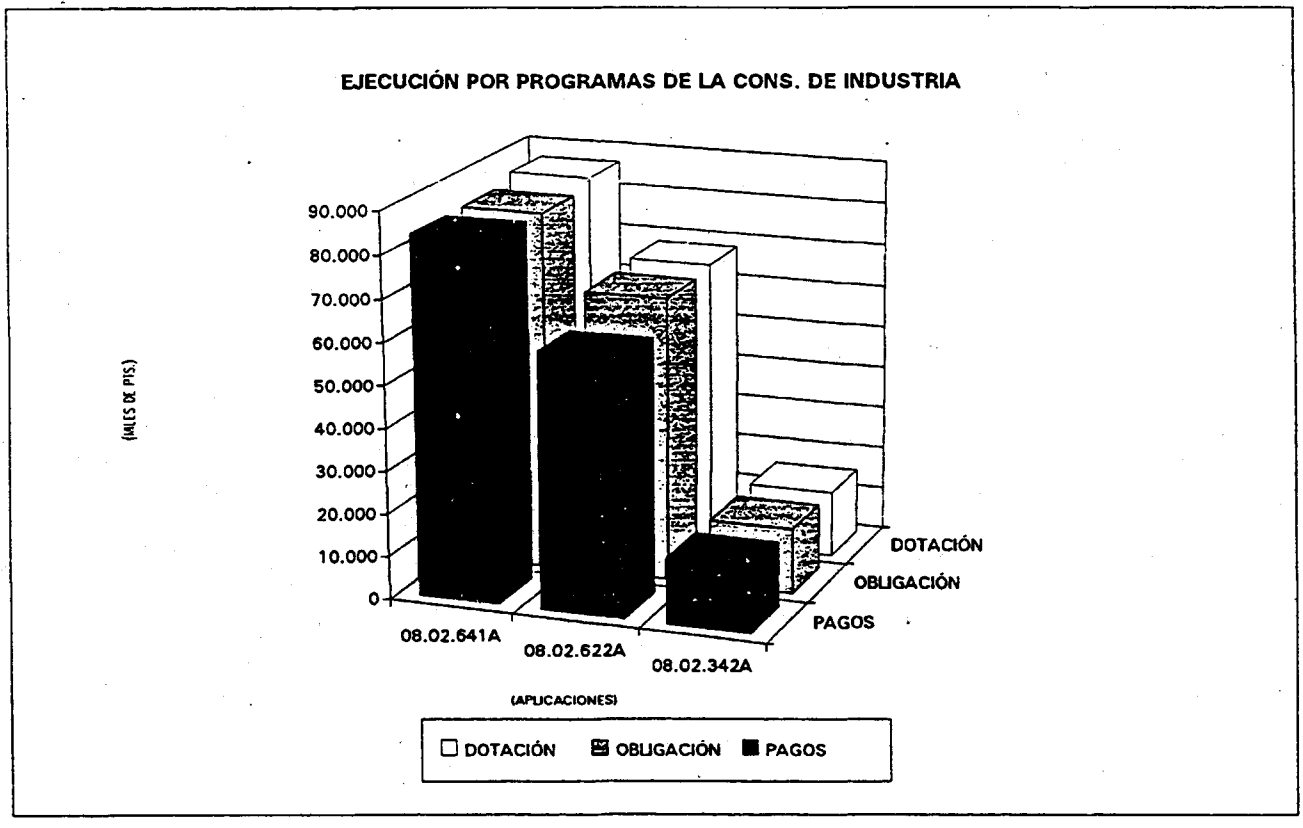
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE PRESIDENCIA

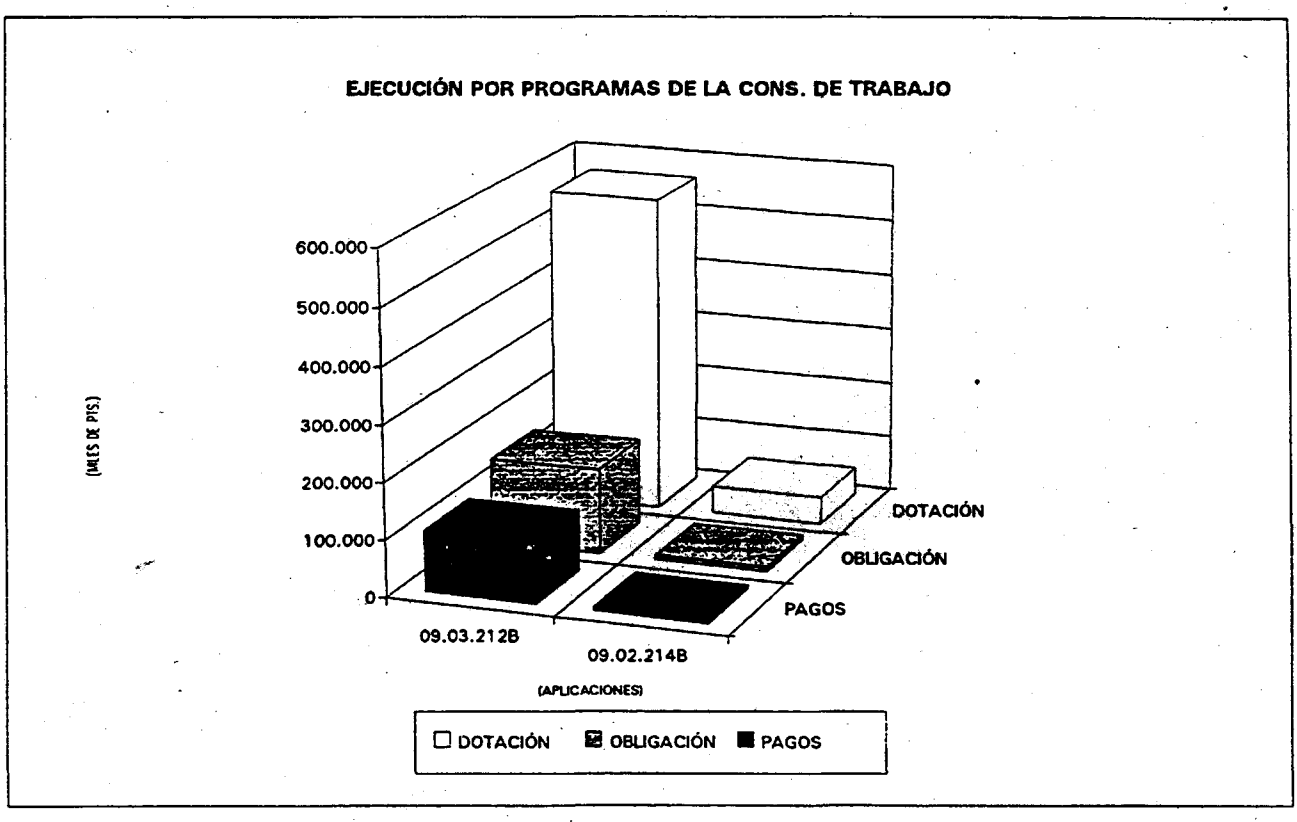


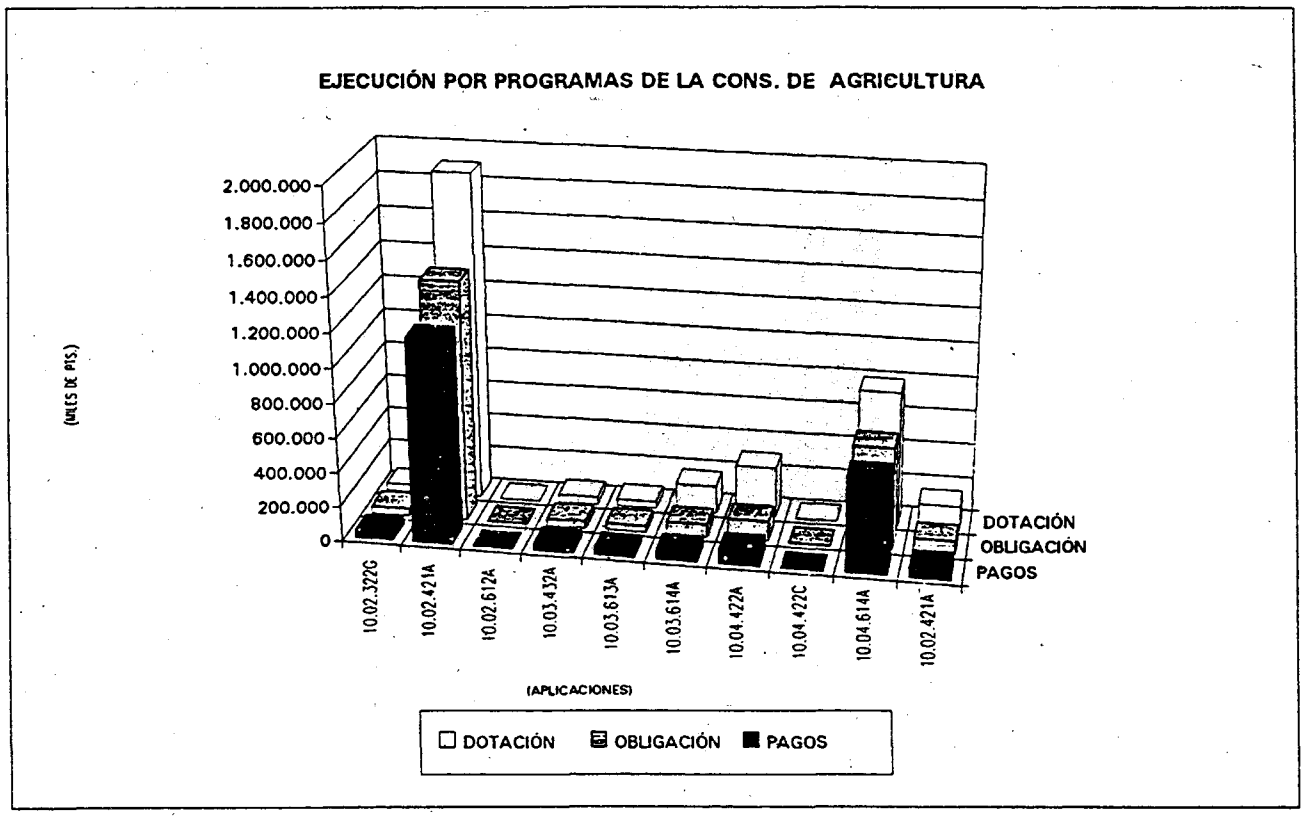
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA C.O.T.O.P.

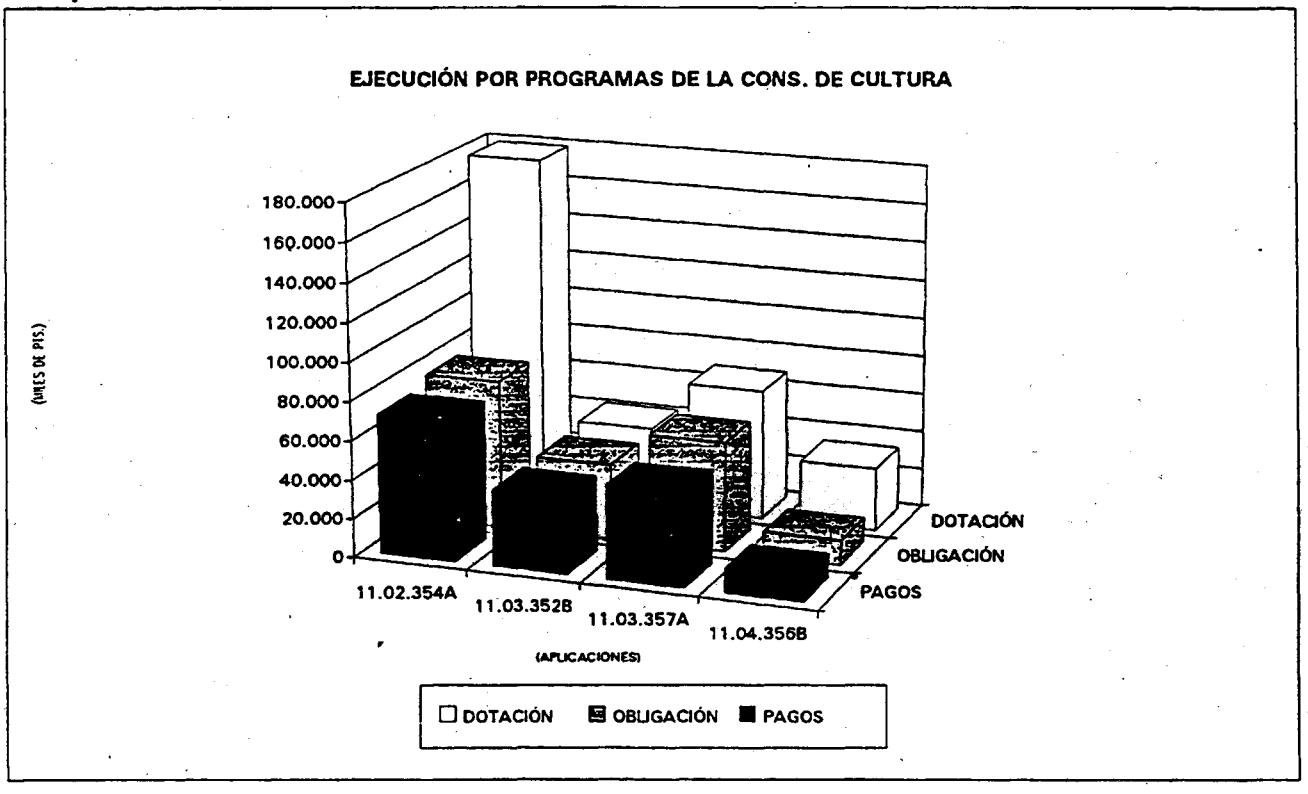


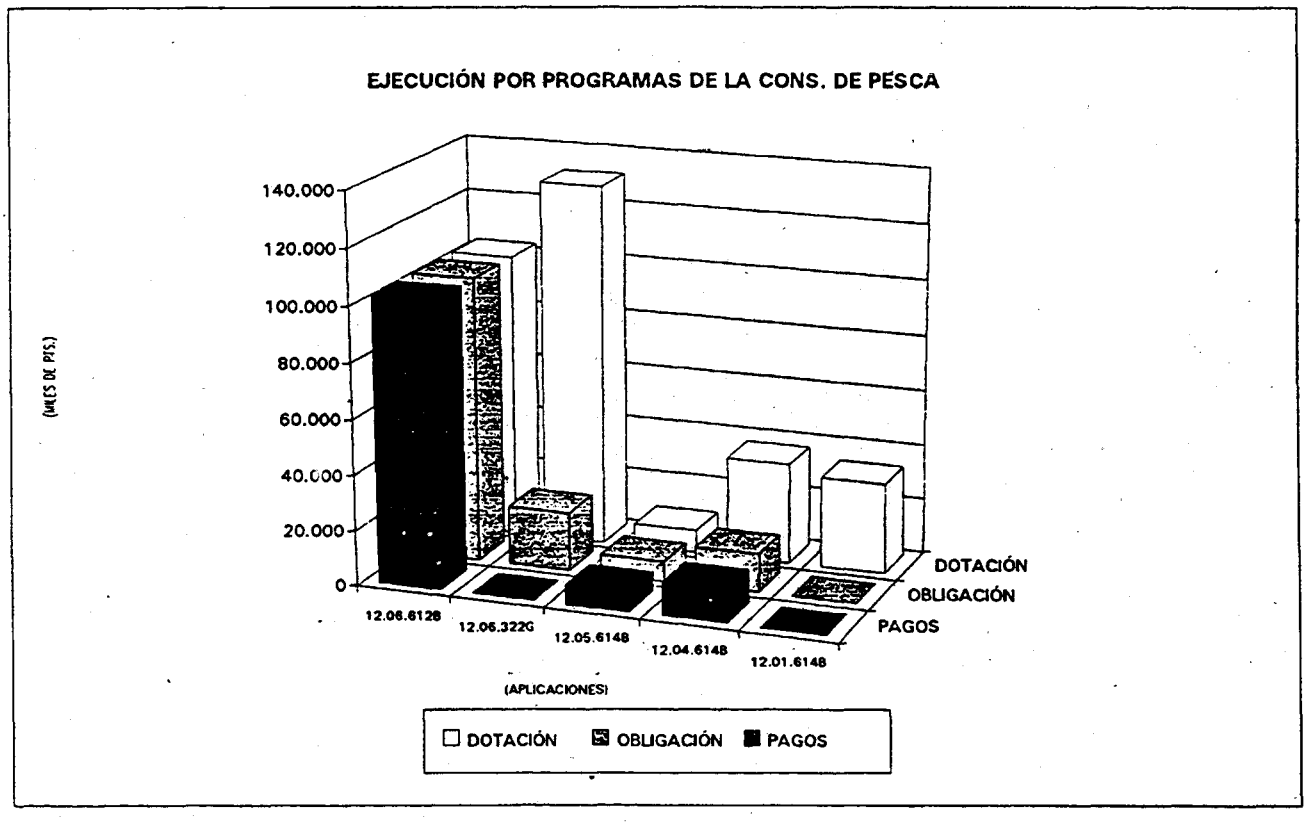

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE EDUCACIÓN
(MILES DE PTS.)
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
07.01.322A
07.01.322B
07.01.322C
07.01.322E
(APLICACIÓN)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
DOTACIÓN OBLIGACIÓN PAGOS

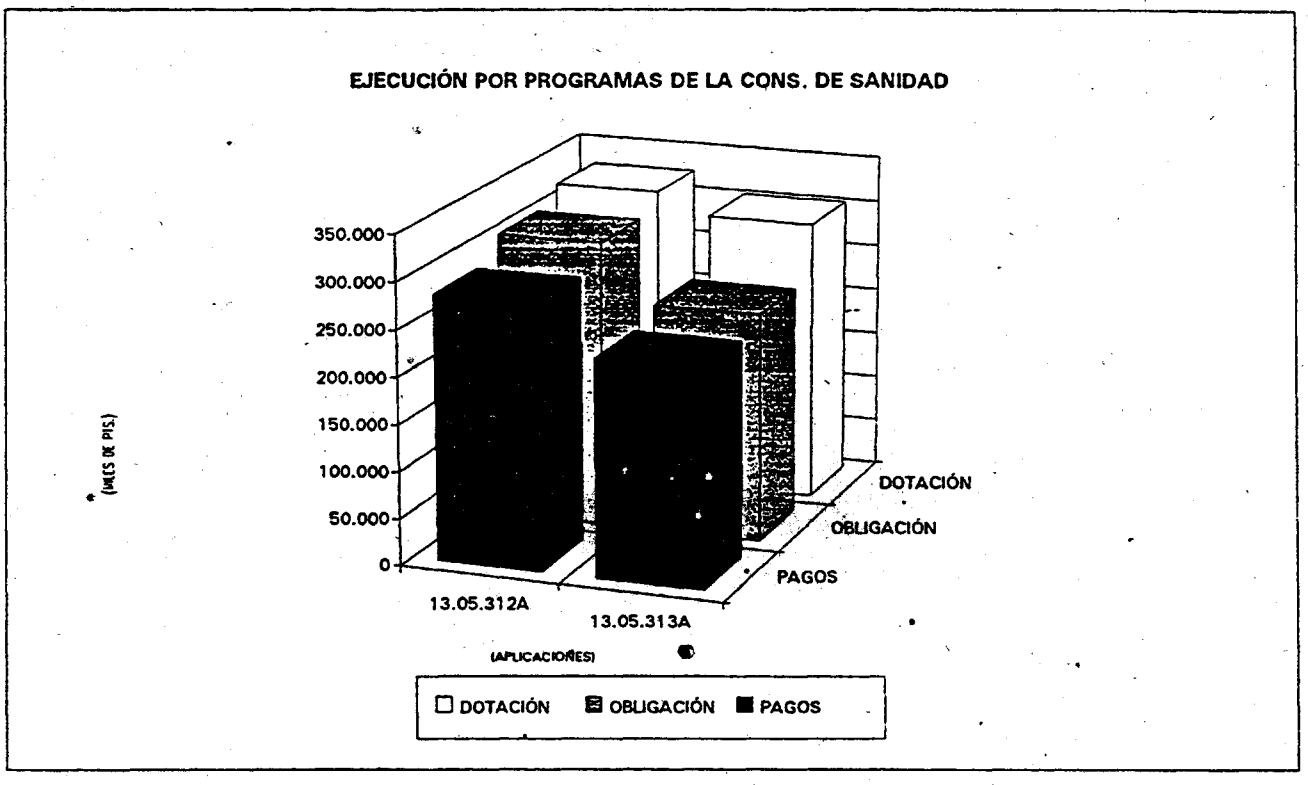

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE INDUSTRIA
(MILES DE PTS.)
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
08.02.641A
08.02.622A
08.02.342A
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
DOTACIÓN OBLIGACIÓN PAGOS

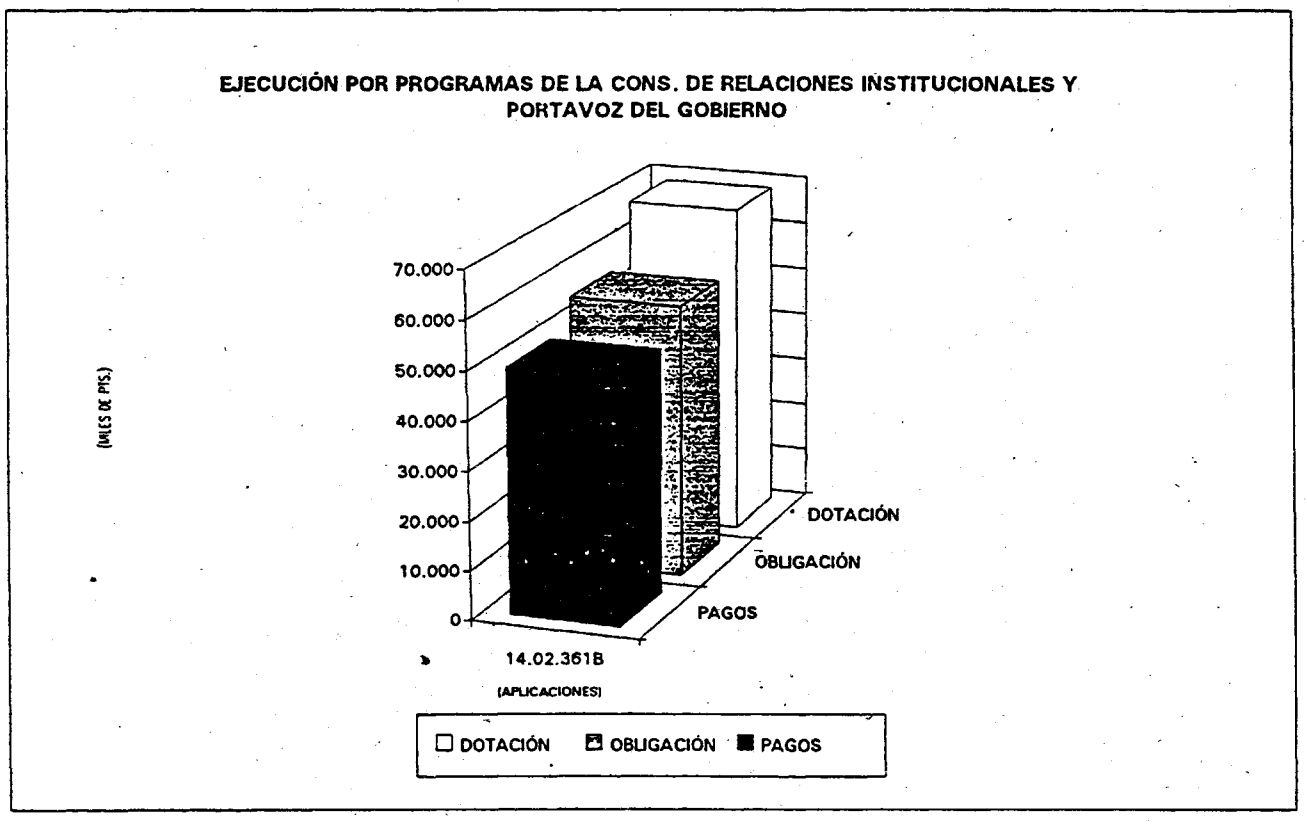

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE TRABAJO
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
(MILES DE PTS.)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
09.03.212B
09.02.214B
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE AGRICULTURA
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
(MILES DE PTS.)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
10.02.322C
10.02.421A
10.02.612A
10.03.432A
10.03.613A
10.03.614A
10.04.422A
10.04.422C
10.04.614A
10.02.421A
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE CULTURA
(MILES DE PTS.)
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
11.02.354A
11.03.352B
11.03.357A
11.04.356B
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
DOTACIÓN OBLIGACIÓN PAGOS


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE PESCA
(MILES DE PTS.)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
12.06.612B
12.06.322G
12.05.614B
12.04.614B
12.01.614B
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
DOTACIÓN OBLIGACIÓN PAGOS


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE SANIDAD
(MILES DE PTS.)
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
13.05.312A
13.05.313A
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
DOTACIÓN OBLIGACIÓN PAGOS


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(MILES DE PTS.)
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
14.02.361B
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
DOTACIÓN OBLIGACIÓN PAGOS

Las modificaciones del F.C.I. de ejercicios anteriores a 1990, durante 1990 fueron las siguientes:

- Una transferencia de crédito de la Consellería de Cultura y Juventud (Aplicación Presupuestaria 11.04.356B) a la Secretaría General para el Deporte de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública (Aplicación Presupuestaria 04.13.356A) por importe de 12.881.- (miles de pesetas) correspondiente al Complejo Deportivo de Monterrei-Pereiro de Aguiar.

- Una generación de crédito por importe de 1.177 (miles de pesetas) de la Consellería de Agricultura, correspondiente a ingresos procedentes del reintegro de ejercicios cerrados con número de orden 793 de fecha 5-3-90 en el Diario de Entrada de Caudales de 1990.

- Una generación de crédito del Instituto Galego da Vivenda e Solo por importe de 244 (miles de pesetas) correspondiente a la incorporación de un remanente de crédito no comprometido por la Administración Central procedente del F.C.I. del año 1985.

- Incorporaciones, de ejercicios anteriores a 1990, al presupuesto de 1990, por importe de 10.485.456.- miles de pesetas.

La dotación final ascendió a 10.486.877.- miles de pesetas, las obligaciones reconocidas a 6.826.875.- miles de pesetas (65,10%), y los pagos a 5.971.762.- miles de pesetas (56,95%).

Por su mínima ejecución destaca la Consellería de Trabajo y Servicios Sociales que solamente alcanza el 26,37% de obligaciones reconocidas y el 19,19% de pagos sobre dotación final.

Por su buena ejecución destaca la Consellería de Industria y Comercio que alcanzó el 98,09% de obligaciones reconocidas y el 82,80% de pagos sobre dotación final.

Considerando que se trata de incorporaciones de créditos de ejercicios anteriores, la ejecución presupuestaria no puede considerarse satisfactoria, ya que sólo se alcanza el 65% de obligaciones reconocidas y el 57% de pagos sobre dotación final.

Es de destacar que existen incorporaciones de créditos desde el año 1983, por lo que sería conveniente que aquellos remanentes de créditos correspondientes a proyectos finalizados que ya no van a ser utilizados, se destinen, mediante un cambio cualitativo autorizado con la normativa vigente, (art.7 apartado 4. de la Ley 7/1984 del 31 de marzo, del F.C.I., B.O.E. nº 80, del 30 de abril) a otros proyectos con el fin de poder aprovechar eficazmente los mencionados remanentes de créditos con su correspondiente financiación y evitar sucesivas incorporaciones de créditos que no se van a ejecutar.

Todas las modificaciones (incorporaciones, transferencias y generaciones) del F.C.I. de ejercicios anteriores a 1990, se realizaron de conformidad con la Orden del 3 de enero de 1989 de la Consellería de Economía y Hacienda que regula la documentación y tramitación de los expedientes de modificaciones Presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOGA nº 20 del lunes 30 de enero de 1989).

4.2.- Ejecución en el ejercicio 1990 de los Proyectos de Inversión financiados con el F.C.I. de 1990.-

4.2.1.- Dotación inicial del F.C.I. del ejercicio 1990.-

Los anexos de las Leyes de Presupuestos de 1990, tanto estatal como autonómica, incluyen la relación individualizada de los proyectos que inicialmente se acuerdan entre ambas Administraciones, a financiar con el F.C.I. de dicho ejercicio.

El F.C.I. del año 1990 correspondiente a la Comunidad de Galicia, figura en la Sección 33, Capítulo VII del Estado de Gastos de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, con una dotación de 27.545.600.- miles de Ptas., correspondiente al F.C.I. y Compensación Transitoria.

En el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma figuran créditos iniciales con la clave de financiación del F.C.I. (04) por importe total de pesetas 19.445.800.000.- y 8.099.800.000- en otras claves de financiación, por corresponder el citado importe a la Compensación Transitoria, lo que totaliza 27.545.600 miles de pesetas, cantidad que es coincidente con los Presupuestos Generales del Estado. El desglose de la clave de financiación (04) es la siguiente:

Capítulo VI.....	19.267.880.000.-
Capítulo VII.....	177.920.000.-
Total F.C.I.....	19.445.800.000.-

En las citadas dotaciones, están incluidas las correspondientes al Instituto Galego da Vivenda e Solo, Organismo Autónomo dependiente de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas (COTOP), con un importe de créditos iniciales de Ptas. -3.730.000.000.-

Por otra parte, las dotaciones de gastos de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, en la Sección 33.- Transferencias de Capital (Capítulo VII), en concepto de F.C.I. y Compensación Transitoria, figura a favor de la Comunidad de Galicia un crédito de 27.545.600.- miles de pesetas, que está recogido en el Presupuesto de Ingresos de la Comunidad Gallega de la siguiente forma:

Concepto 701.-		
(Para financiar proyectos de F.C.I.).....	Pts	19.445.800.000.-
Concepto 703.-		
(Otras transf. incondicionadas).....	Pts	8.099.800.000.-
SUMA TOTAL.....	Pts	27.545.600.000.-

El concepto 703 - Otras transferencias incondicionadas queda a cero en derechos reconocidos líquidos en la liquidación de 1990, que se analiza en este informe en el apartado 4.3.2.- Ingresos del F.C.I. en el ejercicio 1990.

El desglose de las dotaciones iniciales consta de 141 proyectos de inversión, cuya distribución por programas y Consellerías es la siguiente:

Dotación Ley Presupuestos Generales del Estado 1990

ESTADO	Miles de Pesetas	%
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS		
Vivienda	3.730.000	
Urbanismo y Arquitectura	89.125	
Infraestructura Urbana, Saneamiento y Abastecimiento	2.138.500	
Protección y Mejora del Medio Ambiente	89.125	
Infraestructura del Transporte por Carretera	4.417.180	
Infraestructura y Explotación Portuaria	865.750	
TOTAL	11.329.680	58%
EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA		
Educación	3.680.100	
TOTAL	3.680.100	19%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA		
Agricultura	3.575.920	
TOTAL	3.575.920	19%
SANIDAD		
Sanidad	860.100	
TOTAL	860.100	4%
TOTAL DOTACIONES INICIALES F.C.I.- 1990	19.445.800	100%

Dotación Inicial del F.C.I. - 90 por Consellerías, Servicios y Programas.

CAPÍTULO VI	Miles de Pesetas	%
CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
06.02.332A - Ordenación y fomento de la Edificación y Urbanismo	89.125	
06.02.342A - Protección y mejora del Medio Ambiente	89.125	
06.04.412A - Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos	2.138.500	
06.04.413B - Construcción, conservación y explotación de carreteras	4.077.700	
06.04.414A - Construcción, conservación y explotación portuaria	865.750	
06.05.413A - Ordenación e Inspección del Transporte Terrestre	339.480	
06.50.331A - Instituto G. Vivenda e Solo-Vivienda	3.730.000	
TOTAL	11.329.680	58%
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA		
07.01.322A - Educación preescolar y E.G.B.	1.232.900	
07.01.322B - Enseñanza Media	1.179.000	
07.01.322C - Enseñanza Universitaria	988.200	
07.01.322E - Enseñanzas Artísticas	280.000	
TOTAL	3.680.100	19%
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES		
10.02.421A - Infraestructura para la reforma y el desarrollo agrario	3.398.000	18%
TOTAL	3.398.000	18%
CONSELLERÍA DE SANIDAD		
13.02.312A - Atención especializada	775.000	
13.05.313A - Atención primaria de la salud	55.100	
13.05.342A - Protección y promoción de la salud	30.000	
TOTAL	860.100	4%
TOTAL CAPÍTULO VI	19.267.880	99%
CAPÍTULO VII	**Miles de Pesetas**	**%**
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES		
10.02.421A - Infraestructura para la reforma y desarrollo agrario	177.920	1%
TOTAL	177.920	1%
TOTAL CAPÍTULO VII	177.920	1%
TOTAL DOTACIONES INICIALES F.C.I 1990	19.445.800	100%

Diferencias iniciales de las Relaciones de Proyectos del F.C.I. 1990 de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma.

MILES DE PESETAS				
APLICACIÓN y Nº DE PROYECTO	**CONSELLERÍA, PROGRAMA Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO**	**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**	**PRESUPUESTOS C. AUTÓNOMA**	**DIFERENCIAS**
	Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas			
06.04.412A	Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos			
0686/90	Mejora Conducción Abastecimiento Ferrol	25.500	22.500	3.000
0697/90	Edar Emisario Vigo	212.250	215.250	(3.000)
TOTAL PROGRAMA 412.A		**237.750**	**237.750**	**0**
06.04.414A	Construcción, Conservación y Explotación Portuaria			
0524/90	Incidencias	66.485	66.185	300
0525/90	Obras de atraque en Laxe	500	20.500	(20.000)
0526/90	Obras de abrigo en Portonovo (Sanxenxo)	75.000	0	75.000
271/90	Obras de Abrigo en A Guarda	0	50.000	(50.000)
274/90	Dragado y muelle en el Grove Ampliación atraque	0	5.000	(5.000)
277/90	Obras Infraestructura en Burela. Muelle Sur	0	100	(100)
279/90	Obras Infraestructuras (Explanada en Ribeira)	0	100	(100)
282/90	Muelle Portocubelo	0	100	(100)
TOTAL PROGRAMA 414.A		**141.985**	**141.985**	**0**
TOTAL C.O.T.O.P		**379.735**	**379.735**	**0**

4.2.2.- Modificaciones producidas en las dotaciones iniciales del F.C.I. 1990 consignadas en los Presupuestos de la Comunidad de Galicia para 1990.-

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 7/1984, de 31 de marzo, del F.C.I. (B.O.E. núm. 80 del 30 de abril), las sustituciones de las obras que integran la relación de proyectos que componen el F.C.I. debe ser acordada entre el Comité de inversiones Públicas y la Consellería competente de la correspondiente Comunidad Autónoma y aprobada por el Consello de la Xunta de Galicia, cuando dicho proyecto corresponda a una competencia transferida a la Comunidad Autónoma.

En 1990, la cuantía total del F.C.I., consignada en los Presupuestos Generales del Estado es coincidente con la dotación final de la Comunidad de Galicia.

Las modificaciones afectaron a los proyectos de inversión inicialmente acordados, consistiendo básicamente en modificaciones sobre las consignaciones iniciales (cambios cuantitativos) y en sustituciones de proyectos (cambios cualitativos).

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, el número inicial de proyectos incluidos en el F.C.I. fue de 141.

De estos proyectos un número de 88, con un presupuesto total de 12.997.276 (miles de pesetas), no fueron modificados durante el ejercicio.

Las modificaciones fueron las siguientes:

- 12 proyectos, con una dotación inicial de 625.251 miles de pesetas fueron totalmente excluidos del F.C.I.
- 41 proyectos, con una dotación inicial de 5.823.272 miles de pesetas, fueron modificados cuantitativamente hasta una dotación final de 5.990.748 miles de pesetas.
- Se incluyó un proyecto nuevo, con una dotación de 457.775 miles de pesetas, correspondiente al proyecto núm. 529.- Incidencias Carreteras (Aplicación presupuestaria 06.04.413B).

Lo descrito anteriormente se resume como sigue:

Miles de Pesetas

PROYECTOS	ESTADO 1-1-1990		COMUNIDAD AUTÓNOMA 31-12-1990	
	Número	Dotación	Número	Dotación
No varían	88	12.997.277	88	12.997.277
Totalmente sustituidos	12	625.251	-----	-----
Modificados	41	5.823.272	41	5.990.748
Nuevos	------	------	1	457.775
TOTAL	141	19.445.800	130	19.445.800

Por programas y Consellerías las modificaciones afectaron de la siguiente forma:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA	ESTADO DOTACIÓN INICIAL	COMUNIDAD GALLEGA DOTACIÓN 31-12-90	DIFERENCIAS
07.01.322A Educación Preescolar y Enseñanza General Básica	925.322	936.046	-10.724
07.01.322B Enseñanza Media	1.423.613	1.412.889	+10.724
TOTAL	2.348.935	2.348.935	----

Los restantes programas no fueron modificados en su cuantía global, significándole que el proyecto 721 de Incidencias para Revisiones, Liquidaciones, Modificados, Complementarios, etc, está repartido en 3 programas de la Consellería de Educación.

Por otra parte el proyecto 301.- Construcción y Equipamientos de Centros de Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanidad, está repartido entre el Capítulo VI y VII, debido a una transferencia de 40.000.- miles de pesetas, de inversiones reales a transferencias de capital para el Hospital Santa María Madre de Ourense, perteneciente a la Diputación Provincial de Ourense, correspondiente a la aplicación presupuestaria 13.02.312A. del Capítulo VII, que es coincidente sólo en la dotación final de la Liquidación, pero no en la inicial.

A continuación se relacionan todos los proyectos con su dotación inicial a 1-1-90 del Estado y con la dotación final a 31-12-90 en la Comunidad Autónoma de Galicia.-

F.C.I. - 1.990
DIFERENCIAS ENTRE LA DOTACIÓN INICIAL DEL ESTADO Y LA FINAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.02.332A
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL URBANISMO
DOTACIÓN: 89.125

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
608/90	Proyectos en materia de urbanismo	89.125	89.125	0
	TOTAL	89.125	89.125	0

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.02.342A
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
DOTACIÓN: 89.125

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
609/90	Proyectos en materia de medio ambiente	89.125	89.125	0
	TOTAL	89.125	89.125	0

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.412A
PROGRAMA: GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS
DOTACIÓN: 2.138.500

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
500/90	Saneamiento general en Viveiro	95.000	95.000	0
501/90	Saneamiento del río Lagares en Canido	40.000	40.000	0
502/90	Saneamiento península Torre de Hércules	40.000	40.000	0
503/90	Colector general Ferrol	40.000	40.000	0
504/90	Saneamiento S. Xoan Piñeiro en Mugardos	27.321	27.321	0
505/90	Colector general Ría del Burgo	100.000	100.000	0
506/90	Saneamiento integral Arteixo	36.000	36.000	0
507/90	Emisario submarino saneamiento A Coruña	100.000	100.000	0
508/90	EDAR Pontevedra - Marín	100.000	100.000	0
509/90	EDAR Cuntis	30.000	30.000	0
510/90	Colector GLI 3 en el río Lagares - Valadares	31.600	31.600	0
511/90	Evacuación saneamiento Fuchiños - Canido	17.120	17.120	0
676/90	Nueva impulsión abastecimiento de Ourense	78.750	78.750	0
677/90	E.T.A.P. de Redondela	43.350	43.350	0
678/90	Abastecimiento Malpica	45.000	45.000	0
679/90	Mejora conducción abastecimiento Ourense	42.750	42.750	0
680/90	Abast. agua Pontevedra - Sanxenxo - Marín	45.000	45.000	0
681/90	Renov. Válv. Recrec. en la presa de Forcadas	63.000	63.000	0
682/90	Cond. M.D: Ría Pontevedra - Sanxenxo	22.500	22.500	0
683/90	Reparación depósitos Ferrol	22.500	22.500	0
684/90	Ampliación E.T.A.P. a Telva - A Coruña	58.500	58.500	0
685/90	Abast. Cambre, Sada, Bergondo, Oleiros	22.500	22.500	0
686/90	Mejora conducción abastecimiento Ferrol	25.500	25.500	0
687/90	Anillo perimetral red distribución en O Barco	22.500	22.500	0
688/90	Anillo perimetral red distribución en Sarria	22.500	22.500	0
689/90	E.T.A.P. y red distribución en Baiona	11.250	11.250	0
690/90	Tubería distribución en Narón, Fene e Ares	22.500	22.500	0
691/90	Abast. en Porriño y polígono industrial	22.500	22.500	0
692/90	Abast. Balón, Doñiños, Brión y Cobas	45.000	45.000	0
693/90	E.T.A.P. Cambados - O Grove	87.500	87.500	0
694/90	Colector marginal inferior A Coruña	262.478	262.478	0
695/90	EDAR Lugo	89.122	89.122	0
696/90	EDAR Monforte	85.509	85.509	0
697/90	EDAR emisario Vigo	212.250	212.250	0
698/90	Colector borde río Lagares Vigo	39.000	39.000	0
699/90	Ampliación abastecimiento Ribadavia	90.000	90.000	0
	TOTAL	2.138.500	2.138.500	0

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.413B
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS
DOTACIÓN: 4.077.700 (en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
529/90	Incidencias carreteras	0	457.775	-457.775
629/90	N/PO/83.5.2 Oia - A Guarda	200.000	240.400	-40.400
630/90	N/OUR/87.4 Hermille - Torno	150.000	427.278	-277.278
631/90	N/AC/83.4.2 Moeche - Xubia	93.137	93.137	0
632/90	N/LU/87.6.2 Boveda - Sarria	100.000	5.258	94.742
633/90	N/AC/84.2.2 Valdoviño - Cedeira	241.157	241.157	0
634/90	N/LU/83.4.3 T.M. Muras	58.608	58.608	0
635/90	N/OUR/83.1.0 Variante de Barbadas	168.158	125.632	42.526
636/90	N/AC/87.2.1 Oza - Curtis	160.827	108.843	51.984
637/90	N/LU/85.2.3 Ponte Miño - Chantada	106.729	156.981	-50.252
638/90	N/AC/85.2 Avda. Arteixo	87.014	87.014	0
639/90	N/LU/85.2.2 Escairón - Ponte río Miño	100.000	0	100.000
640/90	N/PO/87.3 Bueu - Cangas	200.000	139.320	60.680
641/90	N/OUR/87.3 Bande - Hermille	175.000	465.764	-290.764
642/90	N/LU/88.1 supresión paso a nivel Verín	141.018	172.256	-31.238
643/90	N/AC/87.1.1Muros - Carnota	100.000	16.038	83.962
644/90	N/AC/87.1.2 Carnota - Ézaro	25.000	9.950	15.050
645/90	N/AC/85.3.1 Baio - Vimianzo	225.000	149.483	75.517
646/90	N/AC/85.3.2 Vimianzo - Berdeogas	50.000	32.000	18.000
647/90	N/AC/85.3.3 Berdeogas - Cee	25.000	6.930	18.070
648/90	N/AC/85.1 nuevo acceso a Rianxo	350.000	350.000	0
649/90	N/AC/88.1 Rianxo - Boiro	100.000	0	100.000
650/90	N/AC/87.8.2 Boiro - P.Caramiñal	25.000	0	25.000
651/90	N/AC/87.3 Autoestrada Lanza	75.000	26.585	48.415
652/90	N/LU/87.4.2 Masma - Adelán	250.000	248.400	1.600
653/90	N/AC/87.2.2 Curtis - Corredoiras	75.000	0	75.000
654/90	N/AC/87.2.3 Corredoiras - Melide	25.000	0	25.000
655/90	N/AC/87.2.4 Melide - límite Pontevedra	25.000	0	25.000
656/90	N/PO/89.1.4 límite Coruña - Agolada	25.000	0	25.000
657/90	N/PO/85.6 Pontevedra - A Estrada	100.000	16.526	83.474
658/90	N/OUR/85.4.1 Viana do Bolo - Cambela	100.000	7.766	92.234
659/90	N/LU/85.2.1 Monforte - Escairón	50.000	0	50.000
660/90	N/LU/89.4 Chantada - Alto do Faro	25.000	0	25.000
661/90	N/PO/89.1.2 Alto do Faro - Lalín	37.500	24.990	12.510
662/90	N/OUR/85.6.1 Ribadavia - Leiro	125.000	50.000	75.000
663/90	N/OUR/85.6.3 Leiro - O Carballiño	50.000	27.773	22.227
664/90	N/LU/87.2.0 A Fonsagrada - Lastra	50.000	11.500	38.500
665/90	N/LU/87.5 Rábade - Vilalba	25.000	7.863	17.137
666/90	2/PO/320.3 A Ramallosa - Baiona	17.500	12.000	5.500
667/90	N/AC/88.2 Betanzos - Mesón do Vento	11.890	11.890	0
668/90	N/AC/83.3.4.1 Folgoso - Moeche	103	0	103
669/90	N/OUR/83.8.1 Esgos - Alto do Rodicio	21.207	25.710	-4.503
670/90	N/PO/84.2.3 Vincios - Porriño	43.104	53.267	-10.163
671/90	N/PO/87.1 Folgoso - Cachafeiro	1.600	422	1.178
672/90	N/PO/87.5.3 Tui - A Guarda (T-1)	25.000	103.434	-78.434
673/90	N/PO/87.5.3 Tui - A Guarda (T-2)	25.000	103.670	-78.670
674/90	Acceso Arousa a Vilanova	8.000	2.080	5.920
675/90	N/PO/89.4 Atios - Salvaterra	5.148	0	5.148
	TOTAL	4.077.700	4.077.700	0

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.414A
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA
DOTACIÓN: 865.750

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
512/90	Darsena en Ribadeo	8.049	8.049	0
513/90	Mejora muelle Mirasol	11.788	11.788	0
514/90	Dragado y creación explanada Cillero	7.072	7.072	0
515/90	Prolongación dique muelle puerto Burela	24.754	24.754	0
516/90	Acondicionamiento puerto y ría de Foz	30.950	30.950	0
517/90	Mejora y ampliación atraque Cariño	120.800	120.800	0
518/90	Ampliación puerto de Camariñas	101.587	101.587	0
519/90	Muelle en Cangas	140.000	140.000	0
520/90	Obras de abrigo en Meloxo	80.000	80.000	0
521/90	Obras infraestructura Burela	86.265	86.265	0
522/90	Obras de abrigo en Sada	25.000	25.000	0
523/90	Ampliación muelle comercial P. Caramiñal	25.000	25.000	0
524/90	Incidencias puertos	66.485	66.485	0
525/90	Obras de atraque en Laxe	500	500	0
526/90	Obras de Abrigo en Portonovo - Sanxenxo	75.000	75.000	0
527/90	Ampliación de atraque en O Grove	50.000	50.000	0
528/90	Ampliación de atraque en Cedeira	12.500	12.500	0
	TOTAL	865.750	865.750	0

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.05.413A
PROGRAMA: ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACIÓN: 339.480

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
613/90	Infraestructura del transporte	339.480	339.480	0
	TOTAL	339.480	339.480	0

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.50.331A
PROGRAMA: INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
DOTACIÓN: 3.730.000

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
601/90	Fontiñas, 539 vivendas	698.000	698.000	0
602/90	Construcción 400 viviendas en cuatro provincias	1.405.000	815.000	590.000
603/90	Adquisición y urb. de suelo en cuatro provincias	800.000	574.000	226.000
604/90	Plan chabolismo e infraestructura de viviendas	170.000	0	170.000
605/90	Honorarios estudios vivienda y control calidad	70.000	70.000	0
606/90	Revisións, liquid., modificados, complem. etc...	360.000	1.346.000	-986.000
607/90	Adquis. y construcción V.P.O. varias provincias	227.000	227.000	0
	TOTAL	3.730.000	3.730.000	0

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322A
PROGRAMA: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
DOTACIÓN: 936.046

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
701/90	E.G.B. 10 + 2 uds. Ensanche - Ferrol	121.172	121.172	0
702/90	E.G.B. 8 + 2 uds. Petelos - Mos	139.145	139.145	0
703/90	E.G.B. 16 + 2 uds. Culleredo	25.000	19.350	5.650
715/90	E.G.B. 8 + 2 uds. Burela	25.000	19.720	5.280
716/90	E.G.B. 16 uds. Abella	0	0	0
717/90	E.G.B. 16 + 2 uds. Oza - Castrillón	25.000	19.644	5.356
718/90	E.G.B. 16 + 2 uds. Bertamiráns	25.000	24.655	345
719/90	E.G.B. 8 uds. Cedeira	25.000	14.546	10.454
720/90	E.G.B. + 2 uds. A Guía - Moaña	109.818	109.818	0
721/90	Revisiones, liquid., modificados, complem. etc...	85.867	124.238	-38.371
722/90	E.G.B. + 2 uds. Cespón - Boiro	132.639	132.077	562
723/90	E.G.B. + 4 uds. Malpica	144.304	144.304	0
724/90	E.G.B. + 2 uds. Castríz - Santa Comba	67.377	67.377	0
	TOTAL	925.322	936.046	-10.724

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322B
PROGRAMA: ENSEÑANZA MEDIA
DOTACIÓN: 1.412.889

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
704/90	B.U.P. nº6; 960 P.E. Santiago	359.826	359.826	0
705/90	I.E.S.P. 640 P.E. Rianxo	361.744	361.744	0
706/90	I.E.S.P. 640 P.E. Bueu	298.047	298.047	0
707/90	B.U.P.960 P.E. "O Castro" Tui	293.101	293.101	0
721/90	Revisiones, liquid., modificados, complem. etc...	72.895	72.895	0
725/90	B.U.P. 960 P.E. Adormideiras, A Coruña	38.000	27.276	10.724
	TOTAL	1.423.613	1.412.889	10.724

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322C
PROGRAMA: ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
DOTACIÓN: 1.013.723

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
710/90	Casa de la Balconada de Santiago	60.562	60.562	0
711/90	E.T.S.I. Telecomunicaciones - Vigo	220.681	220.681	0
712/90	Facultad de Filología - Santiago	336.855	336.855	0
713/90	Facultad de Económicas y Empr. de Vigo	372.397	372.397	0
721/90	Revisiones, liquid., modificados, complem. etc...	23.228	23.228	0
	TOTAL	1.013.723	1.013.723	0

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322E
PROGRAMA: ENSEÑANZAS ESPECIALES
DOTACIÓN: 317.442

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
708/90	Escuela de Música de Lalín	118.459	118.459	0
709/90	Escuela de Idiomas de Vigo	198.983	198.983	0
	TOTAL	317.442	317.442	0

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 10.02.421A
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA REFORMA Y EL DESARROLLO AGRARIO
DOTACIÓN: 3.575.920

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
	CAPÍTULO VI			
0001/90	Concentración Parcelaria	1.736.000	1.736.000	0
0002/90	Areas y servicios para creación de infr. rural	1.662.000	1.662.000	0
	TOTAL CAPÍTULO VI	3.398.000	3.398.000	0
	CAPÍTULO VII			
0003/90	Mejora Rural	177.920	177.920	0
	TOTAL CAPÍTULO VII	177.920	177.920	0
	TOTAL APLICACIÓN	3.575.920	3.575.920	0

CONSELLERÍA DE SANIDAD
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 13.02.312A
PROGRAMA: ASISTENCIA SANITARIA
DOTACIÓN: 735.000 (Capítulo VI) e 40.000 (Capítulo VII)

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO A 1/1/90	C. AUTÓNOMA A 31/12/90	VARIAC.
	CAPÍTULO VI			
0301/90	Construcción y equip. centros asist. sanitaria	727.500	727.500	0
0305/90	Adecuación y dotación de centros hospitalarios	7.500	7.500	0
	TOTAL CAPÍTULO VI	735.000	735.000	0
	CAPÍTULO VII			
0301/90	Construcción y equip. centros asist. sanitaria	40.000	40.000	0
	TOTAL CAPÍTULO VII	40.000	40.000	0
	TOTAL APLICACIÓN	775.000	775.000	0

CONSELLERÍA DE SANIDAD
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 13.05.313A
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOTACIÓN: 55.100

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO	C. AUTÓNOMA	VARIAC.
		A 1/1/90	A 31/12/90	
303/90	Ley de Sanidad Escolar	30.000	30.000	0
304/90	Programa de prevención del SIDA	25.100	25.100	0
	TOTAL	55.100	55.100	0

CONSELLERÍA DE SANIDAD
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 13.05.342A
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
DOTACIÓN: 30.000

(en miles de pesetas)

Nº PROY.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO	C. AUTÓNOMA	VARIAC.
		A 1/1/90	A 31/12/90	
0302/90	Programa RenVcag	30.000	30.000	0
	TOTAL	30.000	30.000	0

DIFERENCIAS ENTRE DOTACIONES INICIALES DEL ESTADO Y FINALES DE LA C. AUTÓNOMA

(en miles de pesetas)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	ESTADO	C. AUTÓNOMA	VARIAC.
	A 1/1/90	A 31/12/90	
06.02.332A - C. VI	89.125	89.125	0
06.02.342A - C. VI	89.125	89.125	0
06.04.412A - C. VI	2.138.500	2.138.500	0
06.04.413B - C. VI	4.077.700	4.077.700	0
06.04.414A - C. VI	865.750	865.750	0
06.05.413A - C. VI	339.480	339.480	0
Suma sin org. autónomos	7.599.680	7.599.680	0
06.50.331A - C. VI	3.730.000	3.730.000	0
Total C.O.T.O.P.	11.329.680	11.329.680	0
07.01.322A - C. VI	925.322	936.046	-10.724
07.01.322B - C. VI	1.423.613	1.412.889	10.724
07.01.322C - C. VI	1.013.723	1.013.723	0
07.01.322E - C. VI	317.442	317.442	0
Total C. Educación y Ord. Universitaria	3.680.100	3.680.100	0
10.02.421A - C. VI	3.398.000	3.398.000	0
10.02.421A - C. VII	177.920	177.920	0
Total C. Agricultura, Ganadería y Montes	3.575.920	3.575.920	0
13.02.312A - C. VI	735.000	735.000	0
13.02.312A - C. VII	40.000	40.000	0
13.05.313A - C. VI	55.100	55.100	0
13.05.342A - C. VI	30.000	30.000	0
Total C. de Sanidad	860.100	860.100	0
TOTAL GENERAL	19.445.800	19.445.800	0

ESTADO: 141 PROYECTOS
C. AUTÓNOMA: 130 PROYECTOS

4.2.3.- Grado de ejecución de los proyectos de inversión de la Comunidad Autónoma de Galicia.(Cuadro nº 2).-

El grado de ejecución al 31 de diciembre de 1990, de los proyectos de inversión financiados con el F.C.I. del ejercicio 1990, se muestra en el cuadro 2 (resumen general por programas y Consellerías) y en los cuadros 3 al 17 (relación individualizada de los proyectos por programas). Estos cuadros fueron preparados por el Consello de Contas, utilizando las siguientes fuentes:

a).- El código de los proyectos, su denominación, la dotación final y los pagos ordenados, a partir de la información obtenida de la Dirección General de Planificación y Relaciones con la C.E.E. de la Consellería de Economía y Hacienda.

b).- Las obligaciones reconocidas, utilizando las relaciones enviadas por las respectivas Consellerías, de las que se solicitó relación individualizada de los proyectos de inversión y su ejecución en las fases presupuestarias A, D, O, K.

Es de hacer constar que los listados de situación de los proyectos de inversión que se muestran, corresponden únicamente a la financiación del F.C.I. (clave de financiación 04), ya que en muchos casos los citados proyectos están cofinanciados con recursos de la Comunidad Autónoma y FEDER.

Por otra parte la Comunidad Autónoma no tiene implantado el subsistema de proyectos de inversión de Contabilidad Pública, no teniendo control analítico (no existe contabilidad analítica ni financiera) de los proyectos, ya que la contabilidad presupuestaria para el F.C.I. está representada por el artículo 68 del capítulo VI, pero sin desglosar a nivel de concepto, subconcepto o partida los proyectos de inversión. El Consello de Contas, aparte de la documentación anteriormente citada, utilizó la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma , el Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios y la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 1990.

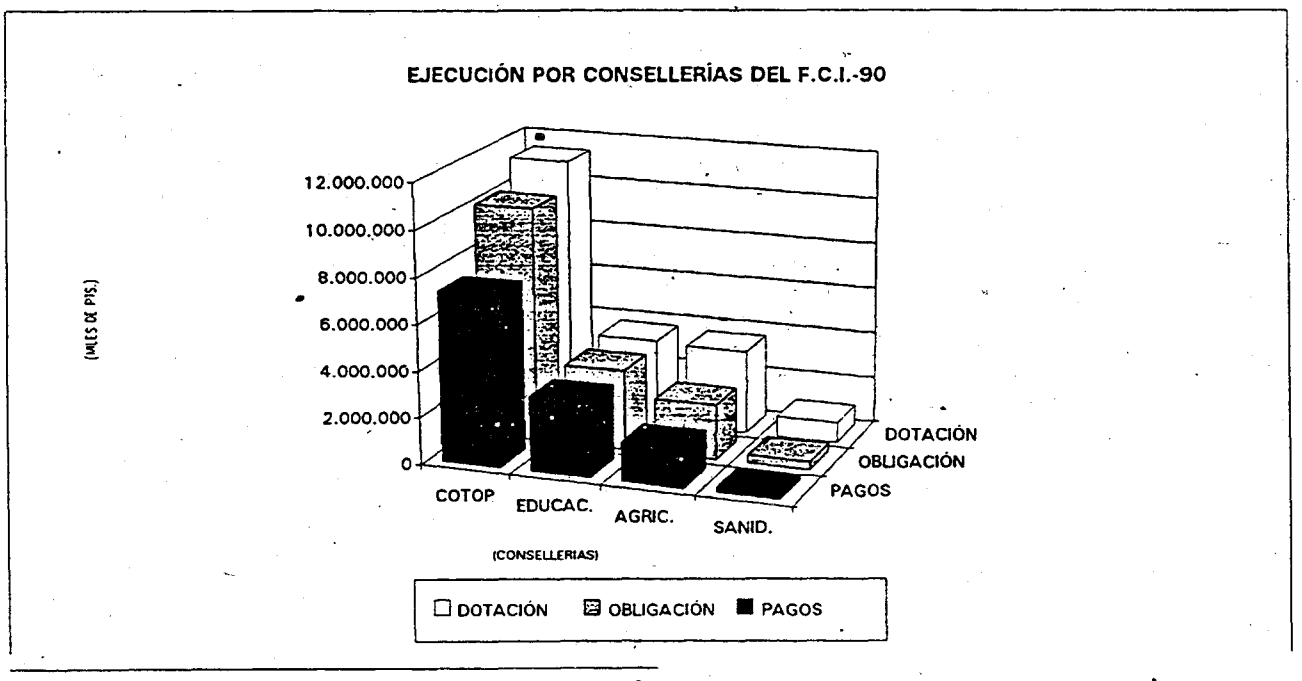
En los cuadros números 3 al 17 se muestra la ejecución individualizada por proyectos de cada Consellería y por Programas.

El desglose de las dotaciones finales consta de 130 proyectos de inversión, cuya distribución por programas y Consellerías es la siguiente:

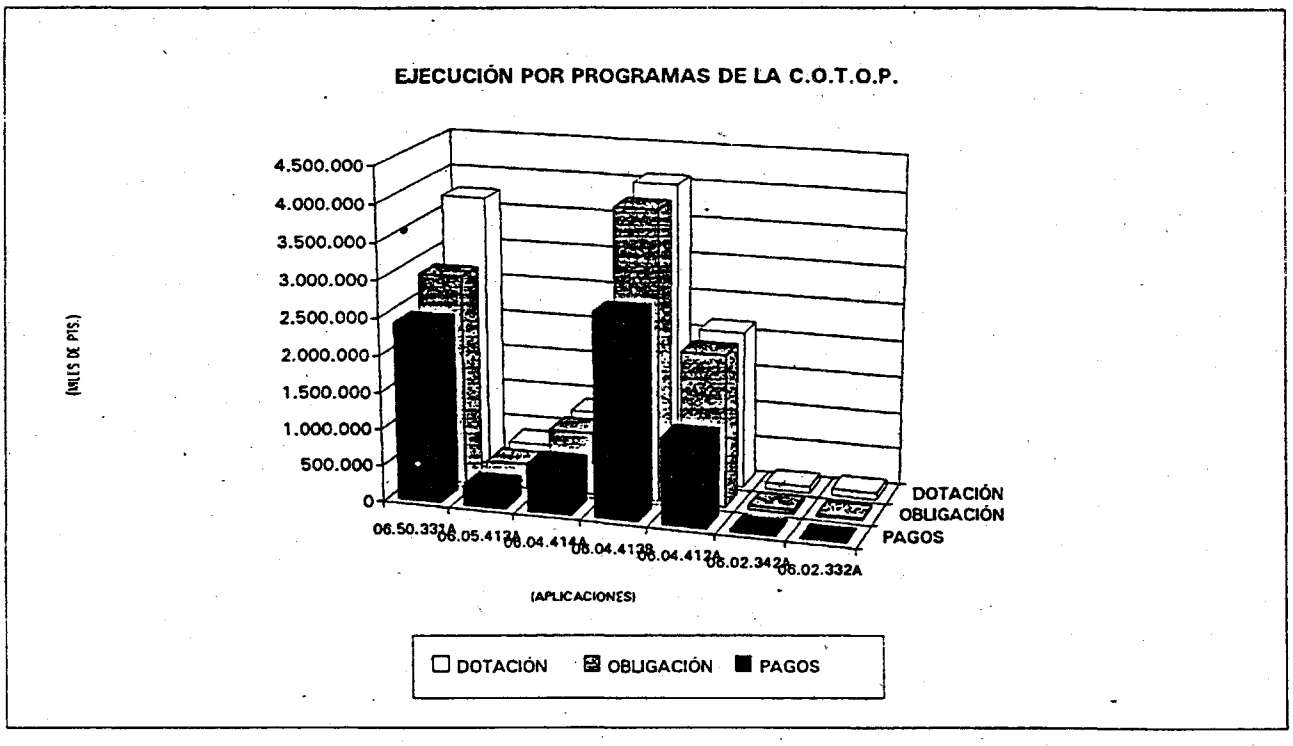
RESUMEN POR CONSELLERÍAS Y PROGRAMAS DE LA EJECUCIÓN DEL F.C.I. - 1.990

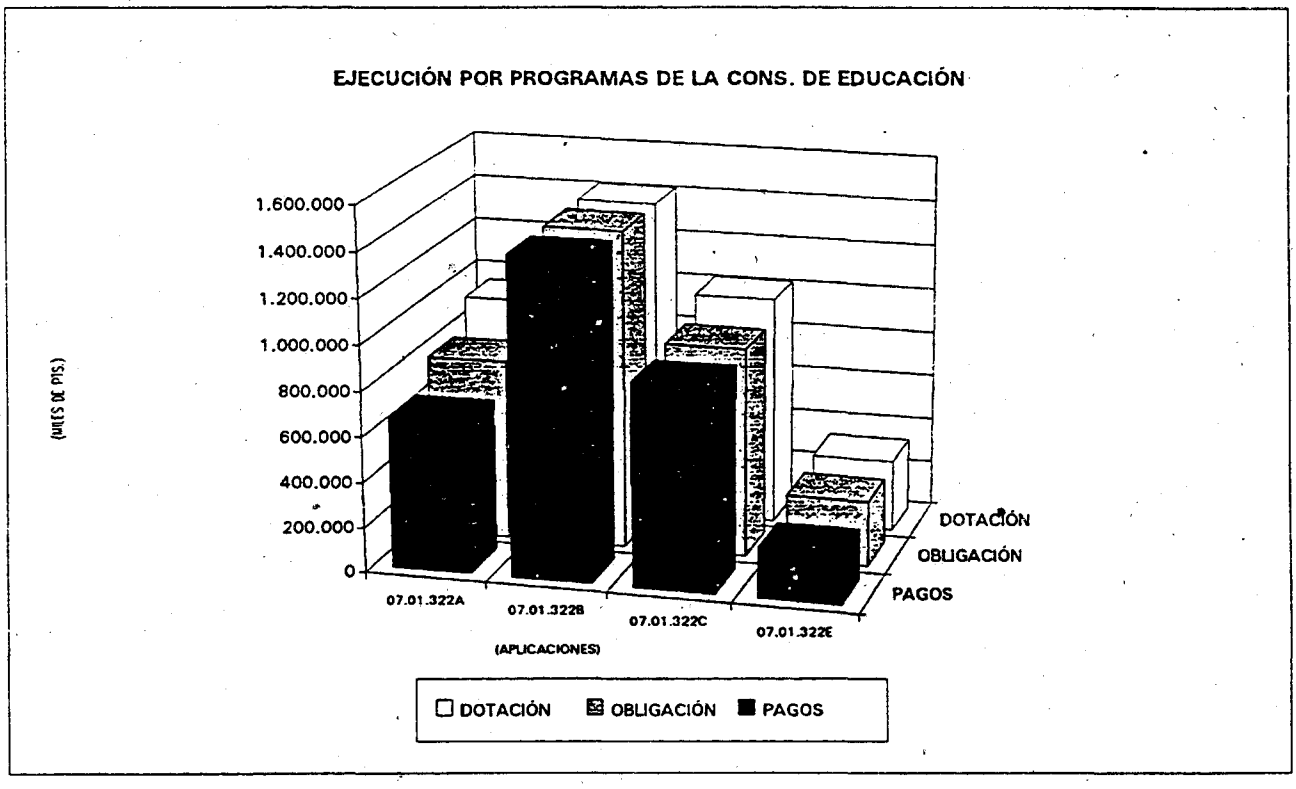
(en miles de pesetas)

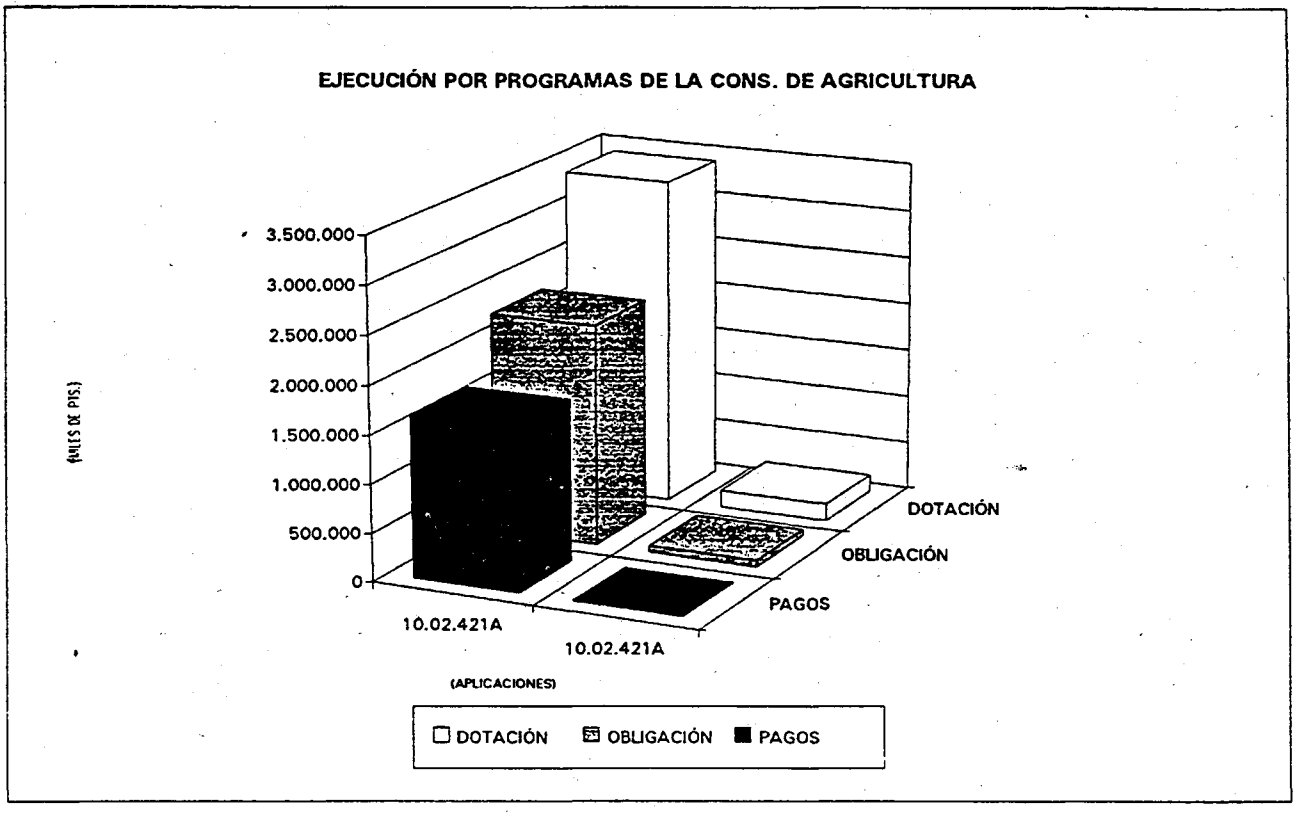
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
06.02.332A.68	89.125	29.012	32,55%	7.059	7,92%
06.02.342A.68	89.125	59.124	66,34%	29.728	33,36%
06.04.412A.68	2.138.500	2.076.985	97,12%	1.190.286	55,66%
06.04.413B.68	4.077.700	3.931.145	96,41%	2.761.659	67,73%
06.04.414A.68	865.750	863.403	99,73%	654.566	75,61%
06.05.413A.68	339.480	339.480	100,00%	276.171	81,35%
Suma sin org. autónomos	7.599.680	7.299.149	96,05%	4.919.469	64,73%
06.50.331A.68	3.730.000	2.858.411	76,63%	2.422.468	64,95%
Total C.O.T.O.P.	11.329.680	10.157.560	89,65%	7.341.937	64,80%
07.01.322A.68	936.046	797.004	85,15%	673.572	71,96%
07.01.322B.68	1.412.889	1.409.386	99,75%	1.408.639	99,70%
07.01.322C.68	1.013.723	926.098	91,36%	902.808	89,06%
07.01.322E.68	317.442	290.238	91,43%	224.820	70,82%
Total C. Educac. y Ord. Universitaria	3.680.100	3.422.726	93,01%	3.209.839	87,22%
10.02.421A.68	3.398.000	2.276.552	67,00%	1.672.015	49,21%
10.02.421A.76	177.920	73.209	41,15%	11.452	6,44%
Total C. Agricult., Ganad. y Montes	3.575.920	2.349.761	65,71%	1.683.467	47,08%
13.02.312A.68	735.000	289.641	39,41%	215.396	29,31%
13.02.312A.76	40.000	0	0,00%	0	0,00%
13.05.313A.68	55.100	46.835	85,00%	10.564	19,17%
13.05.342A.68	30.000	21.088	70,29%	15.465	51,55%
Total C. de Sanidad	860.100	357.564	41,57%	241.425	28,07%
TOTAL GENERAL	19.445.800	16.287.611	83,76%	12.476.668	64,16%

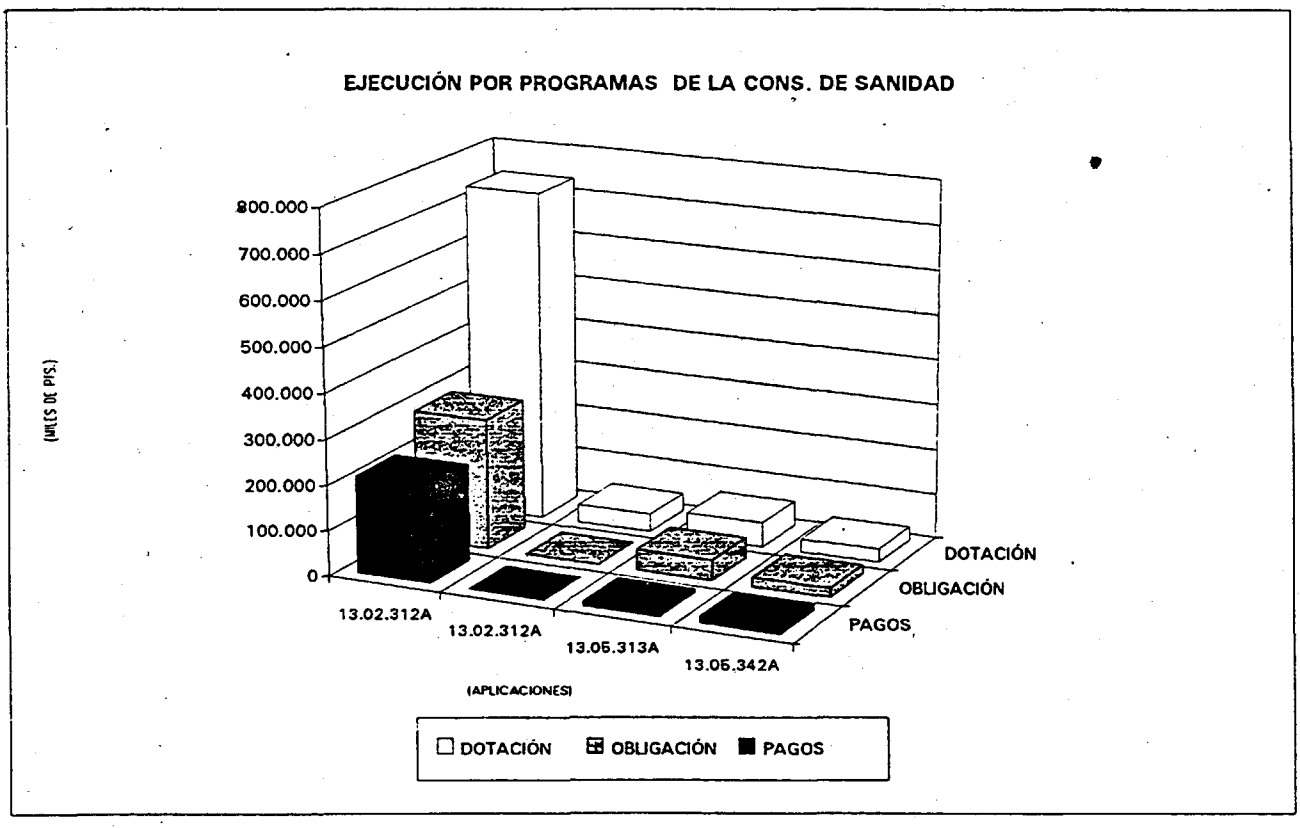


Cuadro nº 2


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA C.O.T.O.P.
(MILES DE PTS.)
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
06.50.331A
06.05.412A
06.04.414A
06.04.413B
06.04.412A
06.02.342A
06.02.332A
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
DOTACIÓN OBLIGACIÓN PAGOS


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE EDUCACIÓN
(MILES DE PTS.)
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
07.01.322A
07.01.322B
07.01.322C
07.01.322E
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
DOTACIÓN OBLIGACIÓN PAGOS


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE AGRICULTURA
(MILES DE PTS.)
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
10.02.421A
10.02.421A
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS


EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. DE SANIDAD
(MILES DE PTS.)
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS
13.02.312A
13.02.312A
13.05.313A
13.05.342A
(APLICACIONES)
DOTACIÓN
OBLIGACIÓN
PAGOS

4.2.3.1.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. (Cuadros números 3 al 9).-

Es la Consellería más inversora de la Xunta de Galicia. La dotación del F.C.I. de 1990 representa el 58% de las totales del F.C.I. de 1990 de la Comunidad Autónoma, con una dotación final de Ptas.- 11.329.680.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación final fue del 89,65% (incluido el I.G.V.S.) y el de pagos del 64,80 %.

Sin tener en cuenta el Organismo Autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo, su grado de ejecución representa el 96,04% y el 64,73%, lo que se considera muy buena ejecución sobrepasando en 13 puntos las obligaciones reconocidas sobre la media de ejecución de la Comunidad, con un total de 96 proyectos.

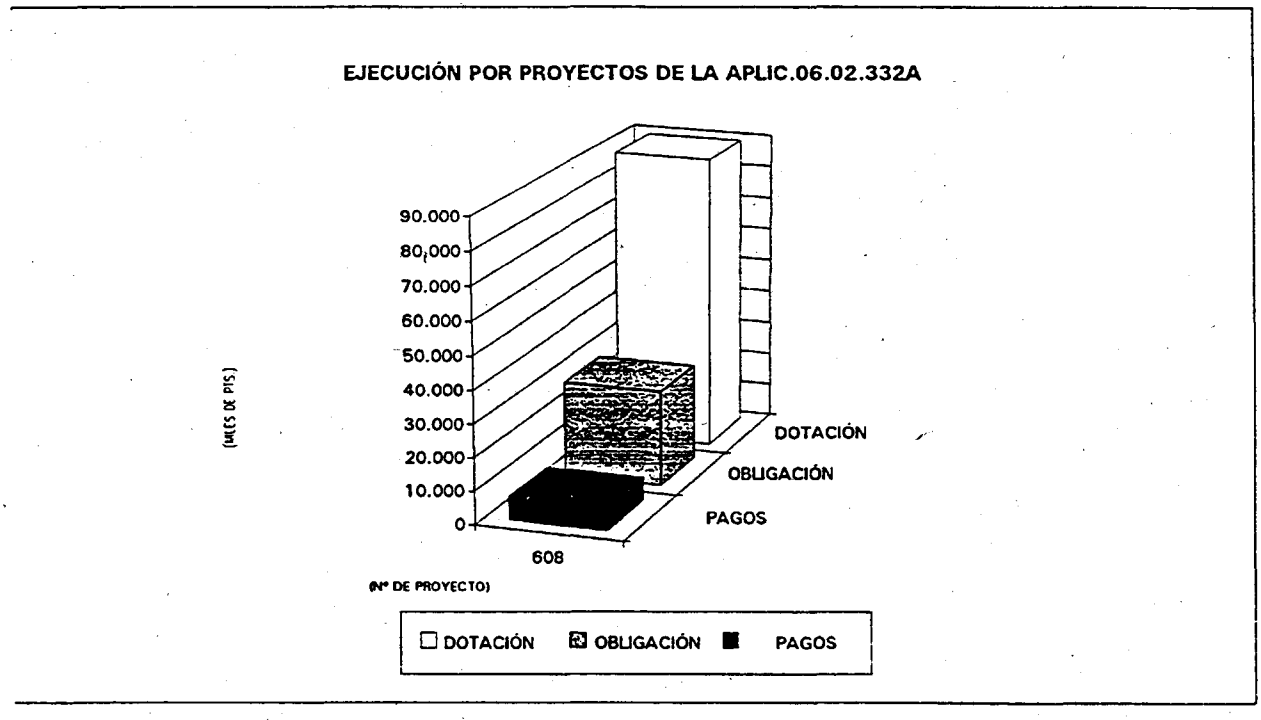
El total de proyectos iniciales fue de 110 y finales de 95, repartidos en 7 programas, habiéndose ejecutado prácticamente todos los proyectos.

La ejecución en los proyectos 518, 520, 521 y 522 ha sido realizada por importe superior a sus dotaciones finales, en detrimento de la ejecución de otros proyectos comprendidos en la misma aplicación presupuestaria. En consecuencia, estos mayores importes debieron ejecutarse una vez autorizada la correspondiente modificación cuantitativa y no con anterioridad a la misma.

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.02.332A.689.10
PROGRAMA 332A: ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN Y DEL URBANISMO.
DOTACIÓN: 89.125

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
608/90	Proyectos en materia de urbanismo	89.125	29.012	32,55%	7.059	7,92%
	TOTAL	89.125	29.012	32,55%	7.059	7,92%

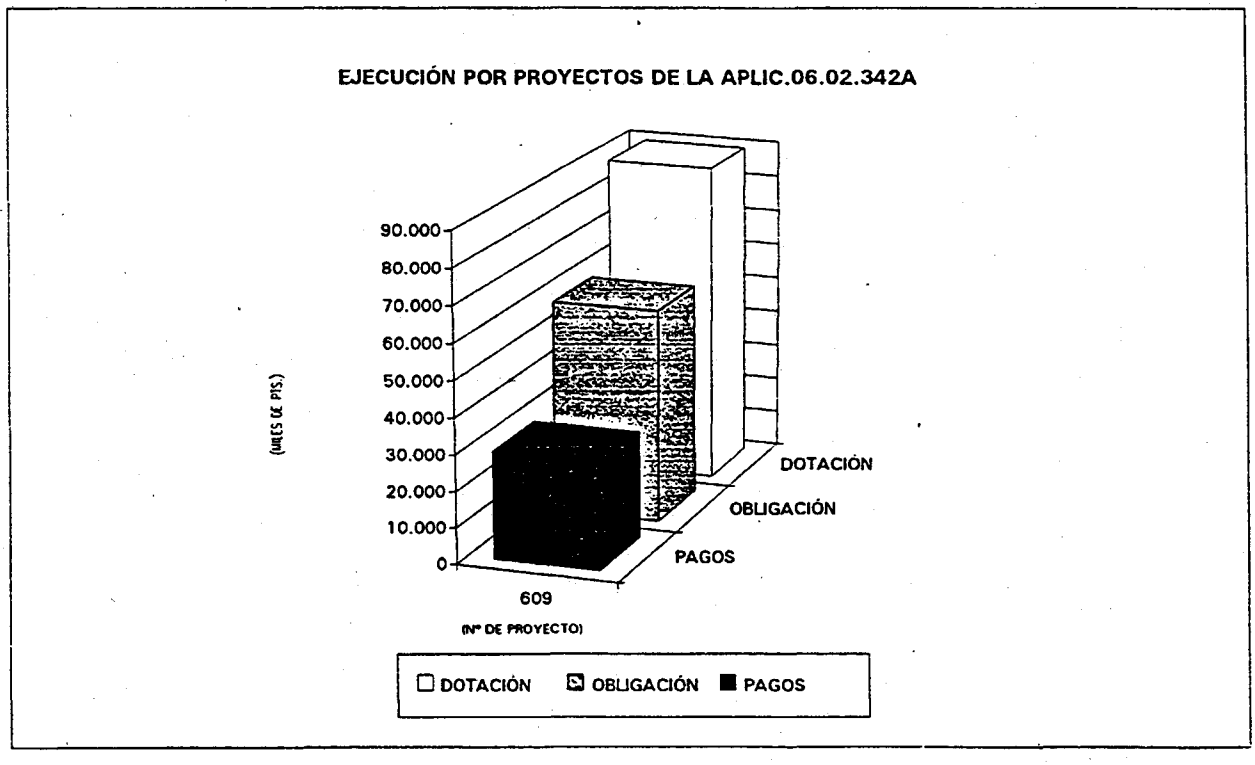


Cuadro nº 3

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.02.342A.689.10
PROGRAMA 342A: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
DOTACIÓN: 89.125

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
609/90	Proyectos en materia de medio ambiente	89.125	59.124	66,34%	29.728	33,36%
	TOTAL	89.125	59.124	66,34%	29.728	33,36%



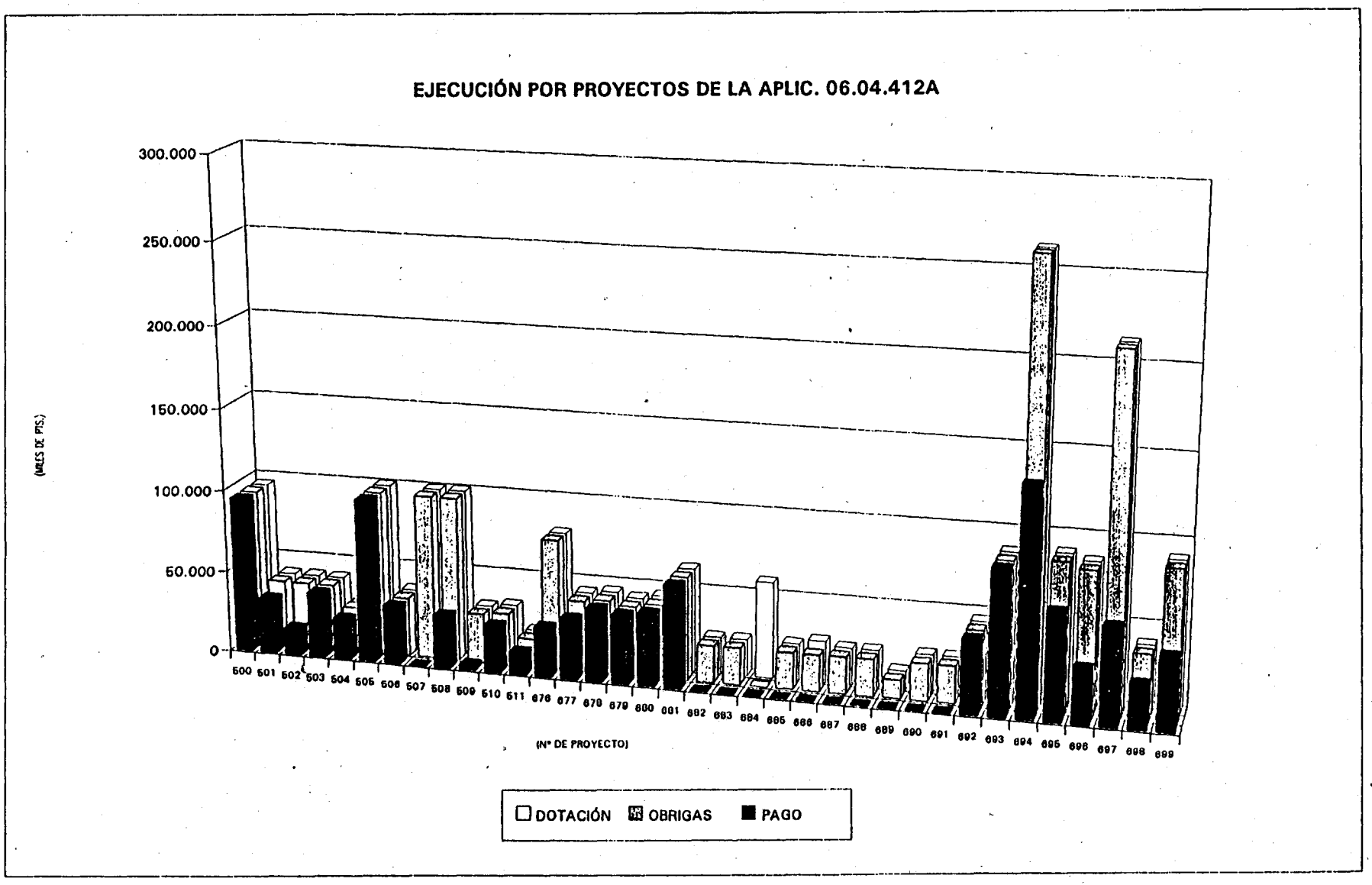
Cuadro nº 4

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.412A . 687.10
PROGRAMA 412A: GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS
DOTACIÓN: 2.138.500

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
500/90	Saneamiento general en Viveiro	95.000	95.000	100,00%	95.000	100,00%
501/90	Saneamiento del río Lagares en Canido	40.000	40.000	100,00%	34.280	85,70%
502/90	Saneamiento península Torre de Hércules	40.000	40.000	100,00%	16.779	41,95%
503/90	Colector general Ferrol	40.000	40.000	100,00%	40.000	100,00%
504/90	Saneamiento S. Xoan Piñeiro en Mugardos	27.321	27.321	100,00%	25.730	94,18%
505/90	Colector general Ría do Burgo	100.000	100.000	100,00%	100.000	100,00%
506/90	Saneamiento integral Arteixo	36.000	36.000	100,00%	35.986	99,96%
507/90	Emisario submarino saneamiento A Coruña	100.000	100.000	100,00%	0	0,00%
508/90	EDAR Pontevedra - Marín	100.000	100.000	100,00%	32.864	32,86%
509/90	EDAR Cuntis	30.000	29.985	99,95%	3.481	11,60%
510/90	Colector GLI 3 en el Lagares - Valadares	31.600	31.600	100,00%	29.385	92,99%
511/90	Evacuación saneamiento Fuchiños - Canido	17.120	17.120	100,00%	14.100	82,36%
676/90	Nueva impulsión abastecimiento de Ourens	78.750	78.750	100,00%	31.000	39,37%
677/90	E.T.A.P. de Redondela	43.350	43.350	100,00%	37.585	86,70%
678/90	Abastecimiento Malpica	45.000	45.000	100,00%	45.000	100,00%
679/90	Mejora conducción abastecimiento Ourense	42.750	42.750	100,00%	42.750	100,00%
680/90	Abast. agua Pontevedra - Sanxenxo - Marín	45.000	45.000	100,00%	45.000	100,00%
681/90	Renov. Válv. Recrec. en la presa de Forcada	63.000	63.000	100,00%	63.000	100,00%
682/90	Cond. M.D: Ría Pontevedra - Sanxenxo	22.500	22.500	100,00%	0	0,00%
683/90	Reparación depósitos Ferrol	22.500	22.500	100,00%	0	0,00%
684/90	Ampliación E.T.A.P. a Telva - A Coruña	58.500	0	0,00%	0	0,00%
685/90	Abast. Cambre, Sada, Bergondo, Oleiros	22.500	22.500	100,00%	0	0,00%
686/90	Mejora conducción abastecimiento Ferrol	25.500	22.500	88,24%	0	0,00%
687/90	Cinto perimetral red distribución en O Barco	22.500	22.500	100,00%	0	0,00%
688/90	Cinto perimetral red distribución en Sarria	22.500	22.500	100,00%	0	0,00%
689/90	E.T.A.P. y red distribución en Baiona	11.250	11.250	100,00%	0	0,00%
690/90	Tubería distribución en Narón, Fene y Ares	22.500	22.500	100,00%	0	0,00%
691/90	Abast. en Porriño y polígono industrial	22.500	22.500	100,00%	0	0,00%
692/90	Abast. Balón, Doñiños, Brión y Cobas	45.000	45.000	100,00%	45.000	100,00%
693/90	E.T.A.P. Cambados - O Grove	87.500	87.500	100,00%	87.500	100,00%
694/90	Colector marginal inferior A Coruña	262.478	262.478	100,00%	137.181	52,26%
695/90	EDAR Lugo	89.122	89.122	100,00%	65.000	72,93%
696/90	EDAR Monforte	85.509	85.509	100,00%	33.212	38,84%
697/90	EDAR emisario Vigo	212.250	212.250	100,00%	59.214	27,90%
698/90	Colector borde río Lagares Vigo	39.000	39.000	100,00%	26.794	68,70%
699/90	Ampliación abastecimiento Ribadavia	90.000	90.000	100,00%	44.445	49,38%
	TOTAL	2.138.500	2.076.985	97,12%	1.190.286	55,66%

Cuadro nº 5

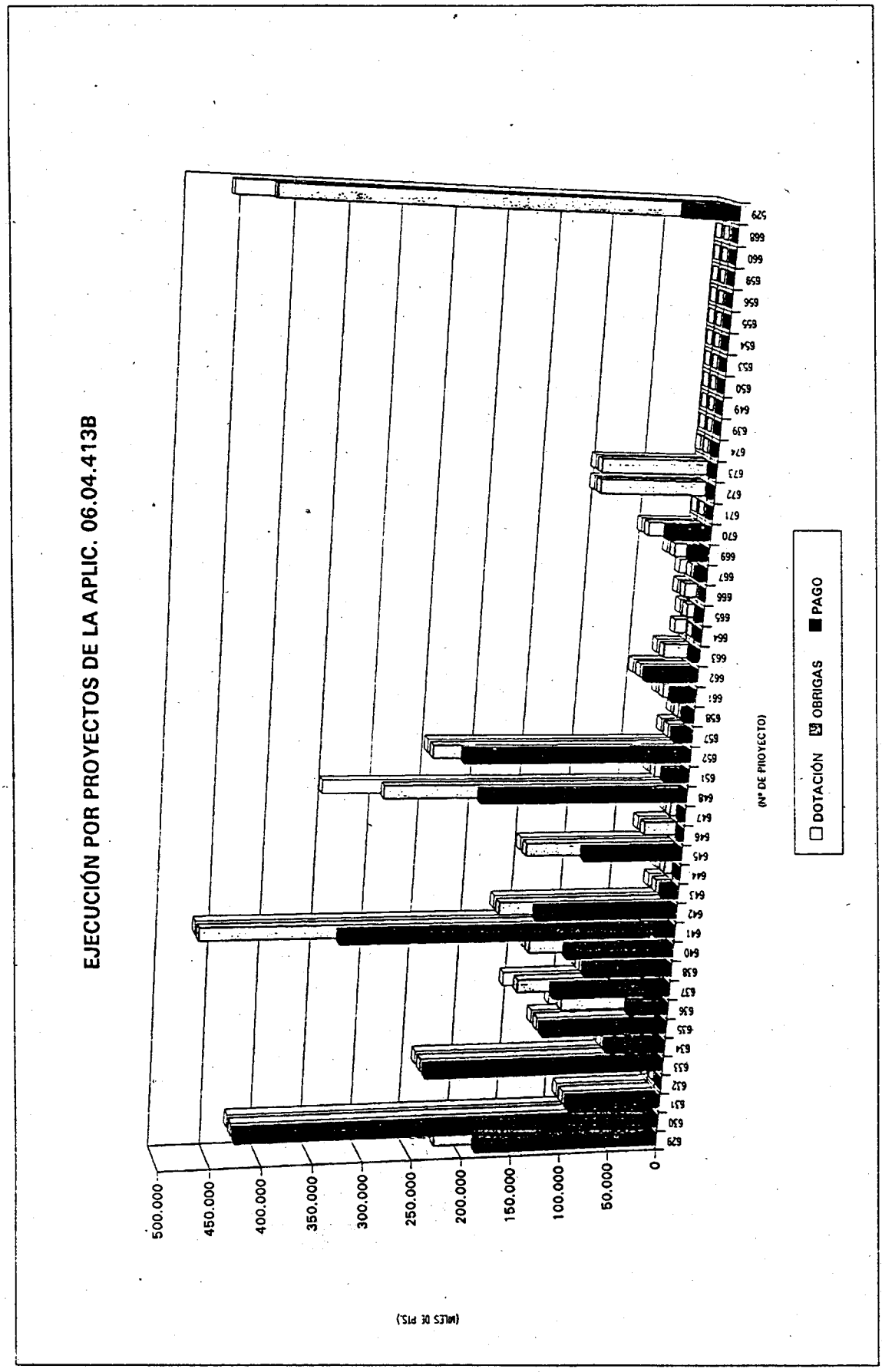

EJECUCIÓN POR PROYECTOS DE LA APLIC. 06.04.412A
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
(MILES DE PTS.)
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
(Nº DE PROYECTO)
DOTACIÓN
OBRIGAS
PAGO

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.413B.687.10
PROGRAMA 413B: CONSTRUC., CONSERV. Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS
DOTACIÓN: 4.077.700

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
629/90	N/PO/83.5.2 Oia - A Guarda	240.400	222.434	92,53%	185.549	77,18%
630/90	N/OUR/87.4 Hermille - Torno	427.278	427.149	99,97%	427.149	99,97%
631/90	N/AC/83.4.2 Moeche - Xubia	93.137	93.137	100,00%	93.137	100,00%
632/90	N/LU/87.6.2 Boveda - Sarria	5.258	1	0,02%	1	0,02%
633/90	N/AC/84.2.2 Valdoviño - Cedeira	241.157	241.157	100,00%	241.157	100,00%
634/90	N/LU/83.4.3 T.M. Muras	58.608	58.608	100,00%	58.608	100,00%
635/90	N/OUR/83.1.0 Variante de Barbadas	125.632	125.632	100,00%	125.632	100,00%
636/90	N/AC/87.2.1 Oza - Curtis	108.843	101.939	93,66%	39.670	36,45%
637/90	N/LU/85.2.3 Ponte Miño - Chantada	156.981	148.402	94,54%	117.636	74,94%
638/90	N/AC/85.2 Avda. Arteixo	87.014	87.014	100,00%	87.014	100,00%
640/90	N/PO/87.3 Bueu - Cangas	139.320	139.320	100,00%	107.536	77,19%
641/90	N/OUR/87.3 Bande - Hermille	465.764	465.764	100,00%	334.583	71,84%
642/90	N/LU/88.1 Supresión paso a nivel Ver	172.256	172.256	100,00%	140.705	81,68%
643/90	N/AC/87.1.1Muros - Carnota	16.038	15.143	94,42%	14.643	91,30%
644/90	N/AC/87.1.2 Carnota - Ézaro	9.950	8.000	80,40%	2.000	20,10%
645/90	N/AC/85.3.1 Baio - Vimianzo	149.483	149.483	100,00%	97.560	65,26%
646/90	N/AC/85.3.2 Vimianzo - Berdeogas	32.000	32.000	100,00%	2.666	8,33%
647/90	N/AC/85.3.3 Berdeogas - Cee	6.930	6.930	100,00%	3.430	49,49%
648/90	N/AC/85.1 Nuevo acceso a Ribadeo	350.000	294.047	84,01%	204.456	58,42%
651/90	N/AC/87.3 Autopista Lanza	26.585	26.585	100,00%	23.136	87,03%
652/90	N/LU/87.4.2 Masma - Adelán	248.400	248.400	100,00%	223.000	89,77%
657/90	N/PO/85.6 Pontevedra - A Estrada	16.526	16.526	100,00%	16.526	100,00%
658/90	N/OUR/85.4.1 Viana do Bolo - Cambela	7.766	7.766	100,00%	7.766	100,00%
661/90	N/PO/89.1.2 Alto do Faro - Lalín	24.990	24.990	100,00%	21.936	87,78%
662/90	N/OUR/85.6.1 Ribadavia - Leiro	50.000	50.000	100,00%	50.000	100,00%
663/90	N/OUR/85.6.3 Leiro - O Carballiño	27.773	27.773	100,00%	6.723	24,21%
664/90	N/LU/87.2.0 A Fonsagrada - Lastra	11.500	1.400	12,17%	1.400	12,17%
665/90	N/LU/87.5 Rábade - Vilalba	7.863	7.863	100,00%	3.636	46,24%
666/90	2/PO/320.3 A Ramallosa - Baiona	12.000	12.000	100,00%	0	0,00%
667/90	N/AC/88.2 Betanzos - Mesón do Vento	11.890	7.509	63,15%	7.509	63,15%
669/90	N/OUR/83.8.1 Esgos - Alto do Rodicio	25.710	25.710	100,00%	16.409	63,82%
670/90	N/PO/84.2.3 Vincios - Porriño	53.267	53.267	100,00%	40.730	76,46%
671/90	N/PO/87.1 Folgoso - Cachafeiro	422	422	100,00%	422	100,00%
672/90	N/PO/87.5.3 Tui - A Guarda (T-1)	103.434	103.434	100,00%	3.434	3,32%
673/90	N/PO/87.5.3 Tui - A Guarda (T-2)	103.670	103.670	100,00%	3.670	3,54%
674/90	Acceso Arousa a Vilanova	2.080	2.080	100,00%	2.080	100,00%
639/90	N/LU/85.2.2 Escairón - Ponte río Miño	0	0	0,00%	0	0,00%
649/90	N/AC/88.1 Rianxo - Boiro	0	0	0,00%	0	0,00%
650/90	N/AC/87.8.2 Boiro - P.Caramiñal	0	0	0,00%	0	0,00%
653/90	N/AC/87.2.2 Curtis - Corredoiras	0	0	0,00%	0	0,00%
654/90	N/AC/87.2.3 Corredoiras - Melide	0	0	0,00%	0	0,00%
655/90	N/AC/87.2.4 Melide - límite Pontevedra	0	0	0,00%	0	0,00%
656/90	N/PO/89.1.4 Límite Coruña - Agolada	0	0	0,00%	0	0,00%
659/90	N/LU/85.2.1 Monforte - Escairón	0	0	0,00%	0	0,00%
660/90	N/LU/89.4 Chantada - Alto do Faro	0	0	0,00%	0	0,00%
668/90	N/AC/83.3.4.1 Folgoso - Moeche	0	0	0,00%	0	0,00%
675/90	N/PO/89.4 Atios-Salvaterra	0	0	0,00%	0	0,00%
529/90	Incidencias Carreteras	457.775	423.334	92,48%	50.150	10,96%
	TOTAL	**4.077.700**	**3.931.145**	**96,41%**	**2.761.659**	**67,73%**

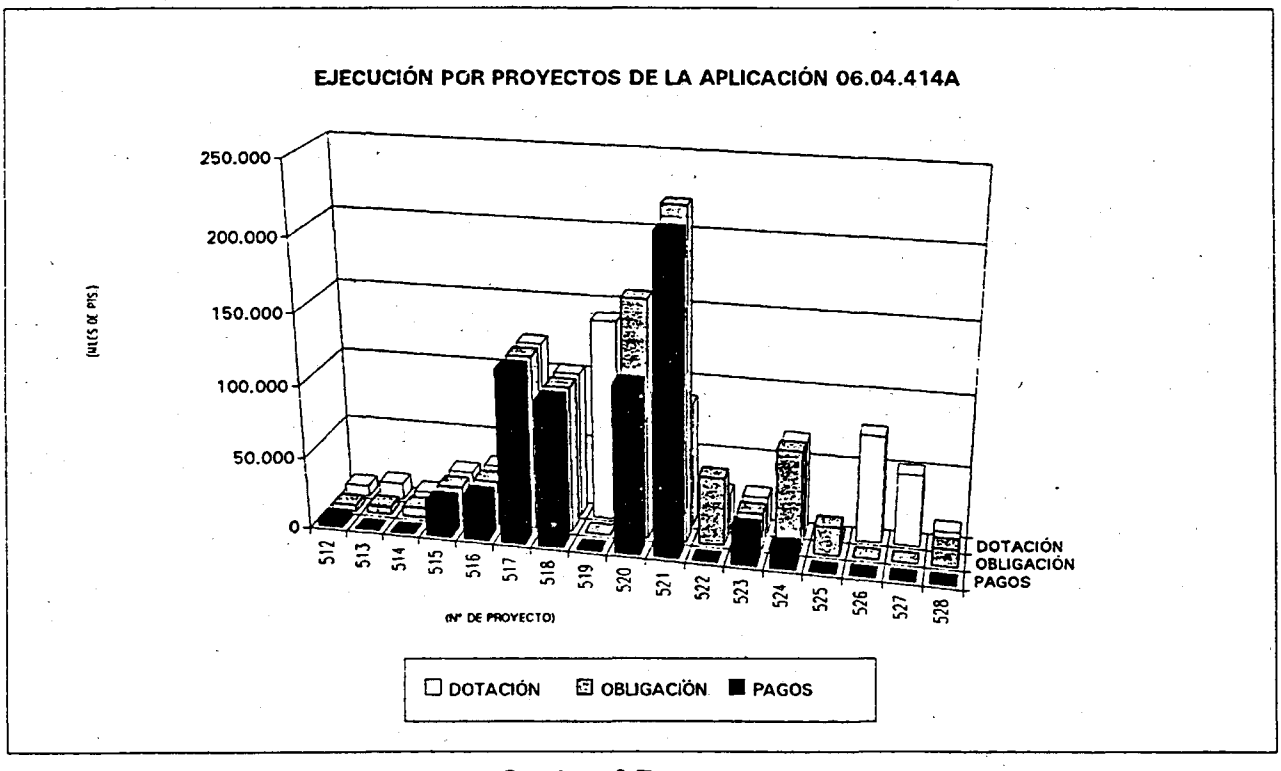
Cuadro nº 6


EJECUCIÓN POR PROYECTOS DE LA APLIC. 06.04.413B
DOTACIÓN
OBRIGAS
PAGO
(Nº DE PROYECTO)
(MILES DE PTS.)
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DELTERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.414A.687.10
PROGRAMA 414A: CONSTR., CONSERVAC. Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA.
DOTACIÓN: 865.750

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
512/90	Darsena en Ribadeo	8.049	5.000	62,12%	5.000	62,12%
513/90	Mejora muelle Mirasol	11.788	5.788	49,10%	0	0,00%
514/90	Dragado y creación explanada Cillero	7.072	7.072	100,00%	0	0,00%
515/90	Prolongación dique muelle puerto Burela	24.754	24.754	100,00%	24.754	100,00%
516/90	Acondicionamiento puerto y ría de Foz	30.950	30.950	100,00%	30.950	100,00%
517/90	Mejora y ampliación atraque Cariño	120.800	120.800	100,00%	120.800	100,00%
518/90	Ampliación puerto de Camariñas	101.587	101.587	100,00%	101.587	100,00%
519/90	Muelle en Cangas	140.000	0	0,00%	0	0,00%
520/90	Obras de abrigo en Meloxo	80.000	165.000	206,25%	115.947	144,93%
521/90	Obras infraestructura Burela	86.265	226.265	262,29%	216.265	250,70%
522/90	Obras de abrigo en Sada	25.000	47.500	190,00%	0	0,00%
523/90	Ampliación muelle comercial P. Caramiñal	25.000	25.000	100,00%	25.000	100,00%
524/90	Incidencias puertos	66.485	70.687	106,32%	14.263	21,45%
525/90	Obras de atraque en Laxe	500	20.500	4100,00%	0	0,00%
526/90	Obras de Abrigo en Portonovo - Sanxenxo	75.000	0	0,00%	0	0,00%
527/90	Ampliación de atraque en O Grove	50.000	0	0,00%	0	0,00%
528/90	Ampliación de atraque en Cedeira	12.500	12.500	100,00%	0	0,00%
	TOTAL	865.750	863.403	99,73%	654.566	75,61%

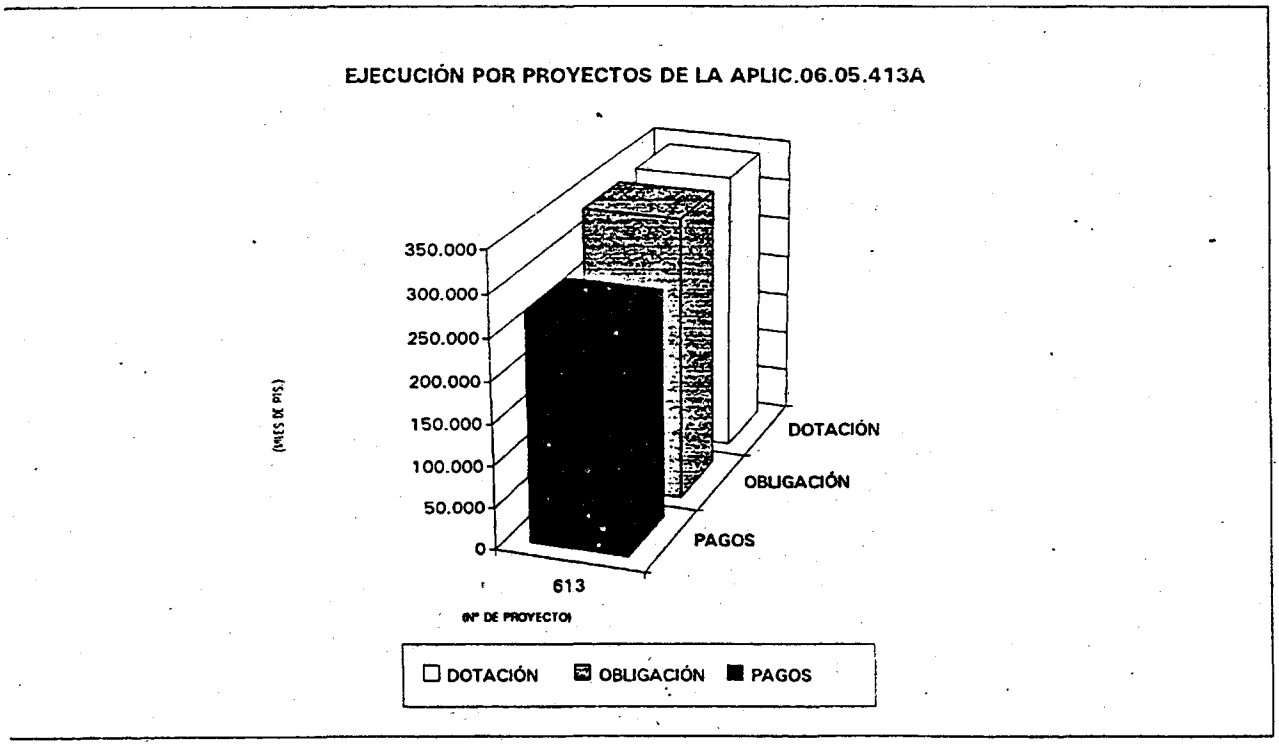


Cuadro nº 7

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.05.413A.682.10
PROGRAMA 413A: ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
DOTACIÓN: 339.480

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
613/90	Infraestructura del transporte	339.480	339.480	100,00%	276.171	81,35%
	TOTAL	339.480	339.480	100,00%	276.171	81,35%

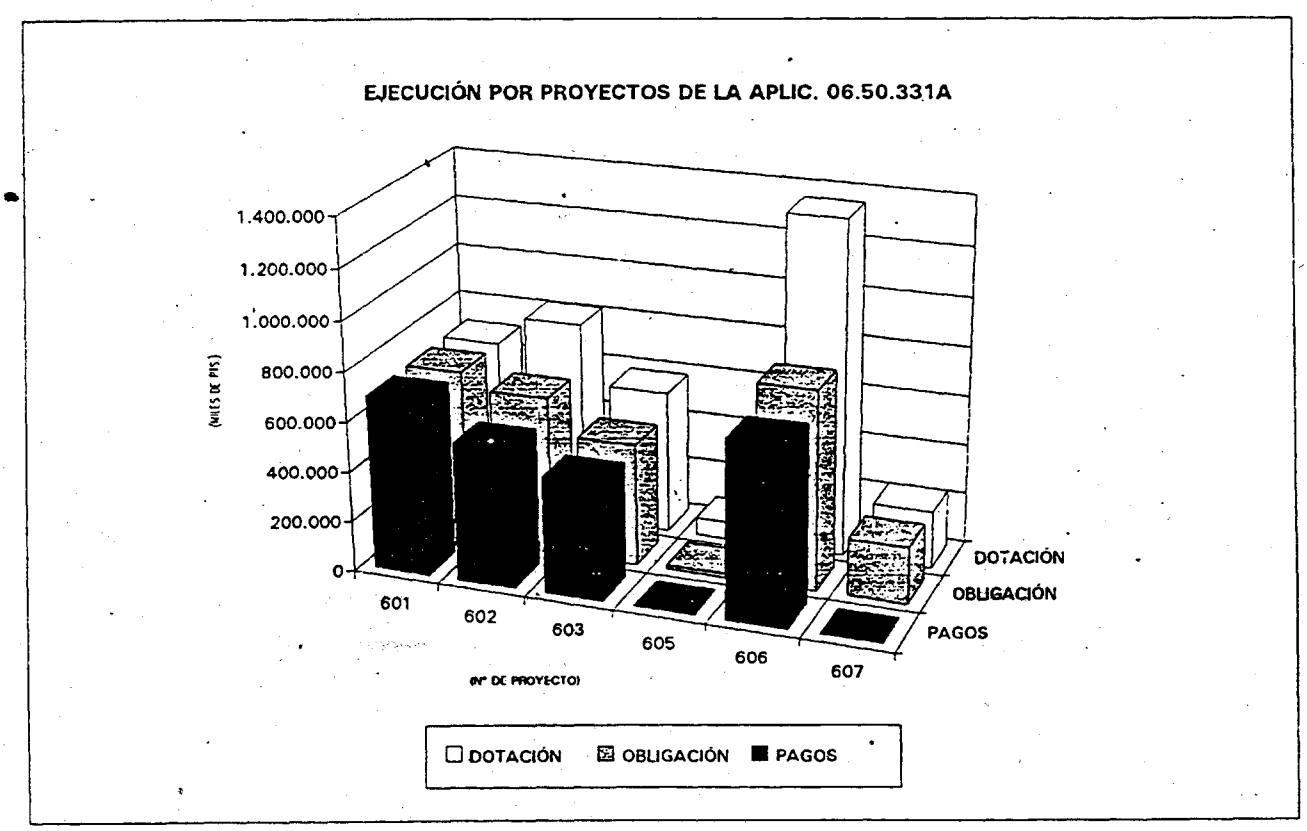


Cuadro nº 8

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 06.50.331A.682.10
PROGRAMA 331A: PROMOC.,ADMÓN., Y AYUDAS PARA LA REHABIL. Y ACCESO A LA VIVIENDA
DOTACIÓN: 3.730.000

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
601/90	Fontiñas, 539 viviendas	698.000	696.731	99,82%	696.731	99,82%
602/90	Construc. 400 viviend. en cuatro provinc.	815.000	632.216	77,57%	551.500	67,67%
603/90	Adquisic. y urb. de suelo en 4 provincias	574.000	488.610	85,12%	461.933	80,48%
605/90	Honor. estudios vivienda y control calid.	70.000	17.712	25,30%	3.904	5,58%
606/90	Revisiones, liquid., modific., complem. etc..	1.346.000	796.438	59,17%	708.400	52,63%
607/90	Adquis. y construcc. V.P.O. varias provinc.	227.000	226.704	99,87%	0	0,00%
	TOTAL	3.730.000	2.858.411	76,63%	2.422.468	64,95%



Cuadro nº 9

4.2.3.2.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. (Cuadros números 10 al 13).-

Su dotación representa el 19% de las totales del F.C.I. del 90 de la Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 3.680.100.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación final fue del 93% y el de los pagos del 87,22%, considerándose muy buena ejecución, ya que sobrepasa en 10 puntos la media de la Comunidad, en obligaciones reconocidas.

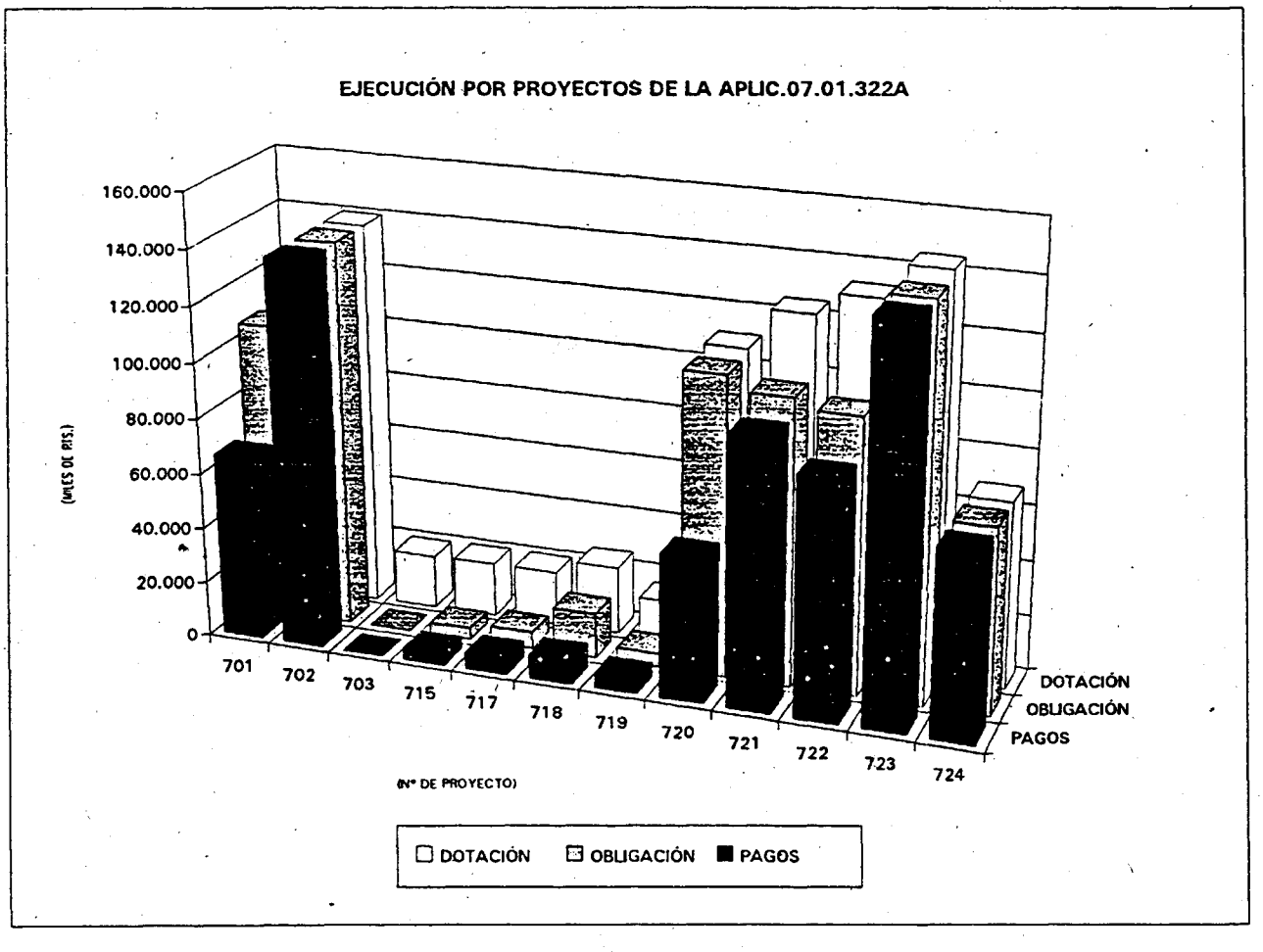
El total de proyectos iniciales fue de 23, coincidiendo en número con los finales, distribuidos en 4 programas, habiéndose ejecutado prácticamente todos los programas en su totalidad.

Por otra parte el proyecto 721.- Incidencias para revisiones, liquidaciones, modificados, complementarios, etc., está repartido en los programas 322A, 322B y 322C.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322A.682.10
PROGRAMA 322A: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA
DOTACIÓN: 936.046

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
701/90	E.G.B. 10 + 2 uds. Ensanche - Ferrol	121.172	106.686	88,05%	66.520	54,90%
702/90	E.G.B. 8 + 2 uds. Petelos - Mos	139.145	139.145	100,00%	139.145	100,00%
703/90	E.G.B. 16 + 2 uds. Culleredo	19.350	0	0,00%	0	0,00%
715/90	E.G.B. 8 + 2 uds. Burela	19.720	4.386	22,24%	4.386	22,24%
717/90	E.G.B. 16 + 2 uds. Oza - Castrillón	19.644	6.281	31,97%	6.281	31,97%
718/90	E.G.B. 16 + 2 uds. Bertamiráns	24.655	16.645	67,51%	8.746	35,47%
719/90	E.G.B. 8 uds. Cedeira	14.546	5.178	35,60%	5.178	35,60%
720/90	E.G.B. + 2 uds. A Guía - Moaña	109.818	107.957	98,31%	52.240	47,57%
721/90	Revisiones, liquid., modificados, complem.	124.238	102.938	82,86%	97.007	78,08%
722/90	E.G.B. + 2 uds. Cespón - Boiro	132.077	99.278	75,17%	85.559	64,78%
723/90	E.G.B. + 4 uds. Malpica	144.304	141.133	97,80%	141.133	97,80%
724/90	E.G.B. + 2 uds. Castriz- Stª Comba	67.377	67.377	100,00%	67.377	100,00%
	TOTAL	936.046	797.004	85,15%	673.572	71,96%

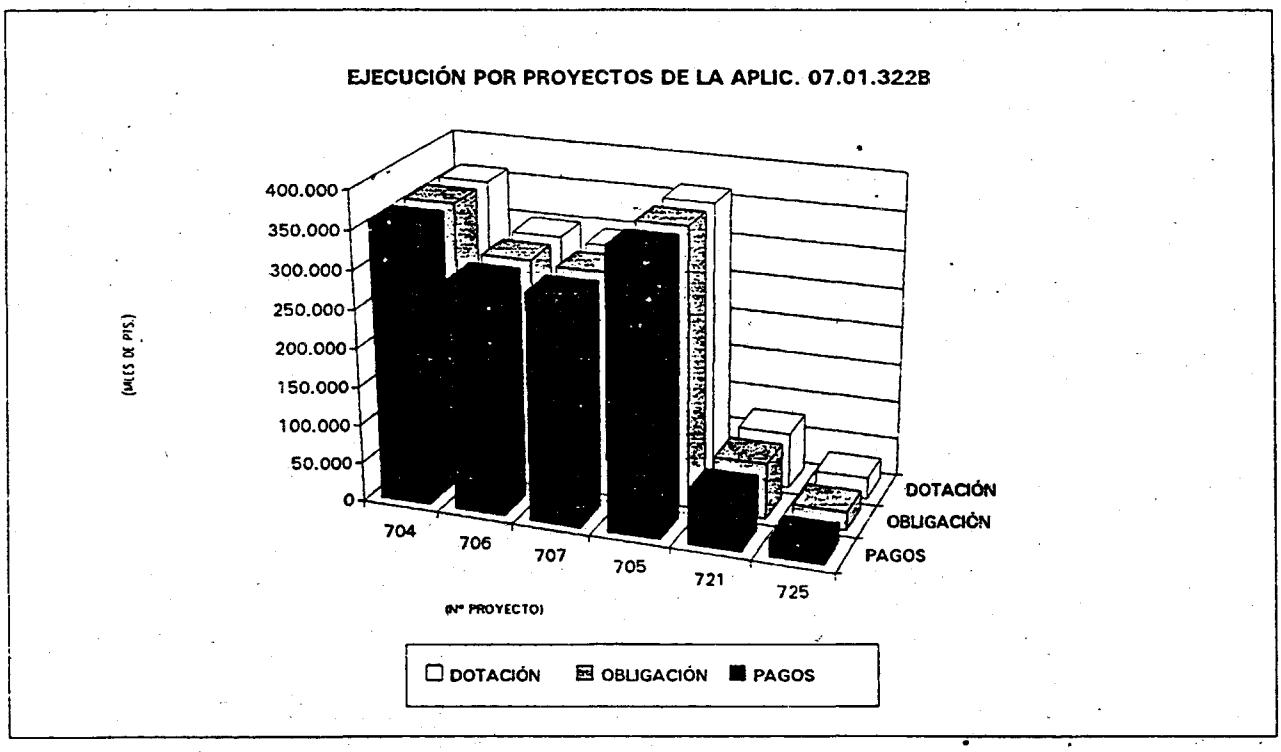


Cuadro nº 10

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322B.682.10
PROGRAMA 322B: ENSEÑANZA MEDIA.
DOTACIÓN: 1.412.889[e]

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
704/90	B.U.P. nº6; 960 P.E. Santiago	359.826	359.826	100,00%	359.826	100,00%
706/90	I.E.S.P. 640 P.E. Bueu	298.047	298.047	100,00%	298.047	100,00%
707/90	B.U.P.960 P.E. "O Castro" Tui	293.101	293.101	100,00%	293.101	100,00%
705/90	I.E.S.P. 640 P.E. Rianxo	361.744	361.744	100,00%	361.744	100,00%
721/90	Revisiones, liquid., modificados, complem.	72.895	72.163	99,00%	71.416	97,97%
725/90	B.U.P. 960 P.E. Adormideras, A Coruña	27.276	24.505	89,84%	24.505	89,84%
	TOTAL	1.412.889	1.409.386	99,75%	1.408.639	99,70%

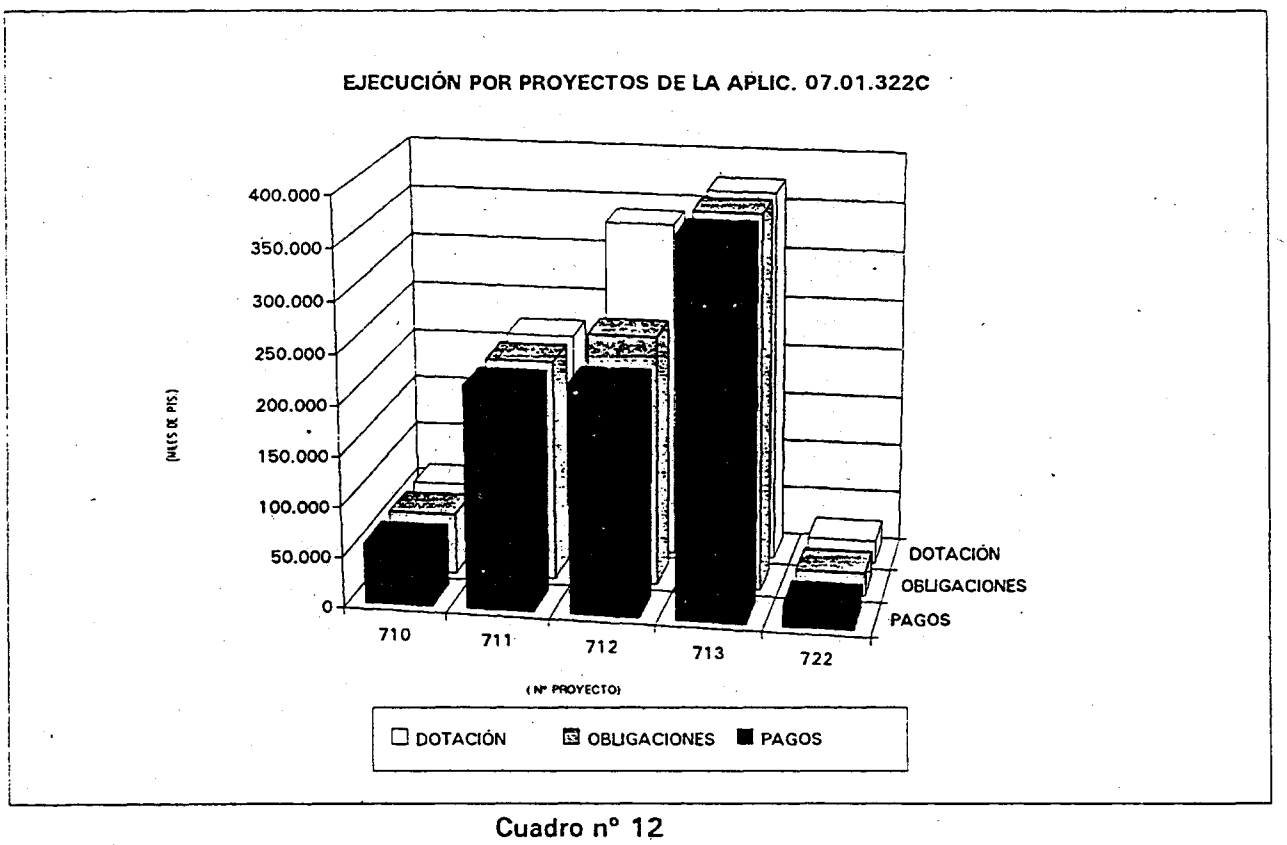


Cuadro nº 11

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322C.682.10
PROGRAMA 322C: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
DOTACIÓN: 1.013.723

(en miles de pesetas)

Nº PROY/ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECOÑECIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGO	PAGO / D.FINAL
711/90	E.T.S.I. Telecomunicaciones - Vigo	220.681	220.681	100,00%	220.681	100,00%
712/90	Facultad de Filología - Santiago	336.855	249.230	73,99%	225.940	67,07%
713/90	Facultad de Económ. y Empr. de Vigo	372.397	372.397	100,00%	372.397	100,00%
721/90	Revisiones, liquid., modific. , complem. etc.	23.228	23.228	100,00%	23.228	100,00%
710/90	Casa de la Balconada de Santiago	60.562	60.562	100,00%	60.562	100,00%
	TOTAL	1.013.723	926.098	91,36%	902.808	89,06%

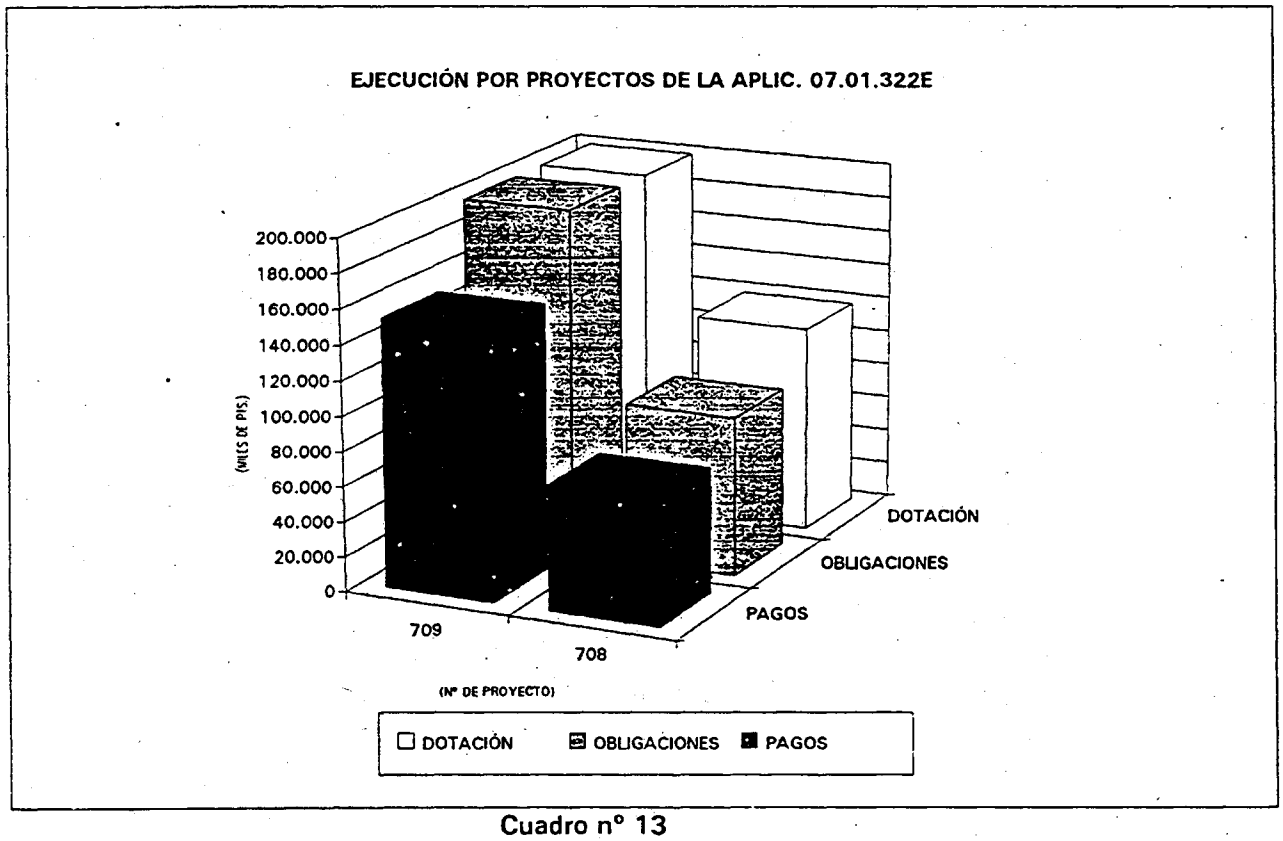


Cuadro nº 12

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322E.682.10
PROGRAMA 322E: ENSEÑANZAS ARTISTICAS
DOTACIÓN: 317.442

(en miles de pesetas)

Nº PROY/ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECOÑECIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGO	PAGO / D.FINAL
708/90	Escuela de Música de Lalín	118.459	91.255	77,04%	71.615	60,46%
709/90	Escuela de Idiomas de Vigo	198.983	198.983	100,00%	153.205	76,99%
	TOTAL	317.442	290.238	91,43%	224.820	70,82%



Cuadro nº 13

4.2.3.3.- Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes. (Cuadro nº 14).-

Su dotación representa el 18% de las totales del F.C.I. del 90 de la Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 3.575.920.000.-

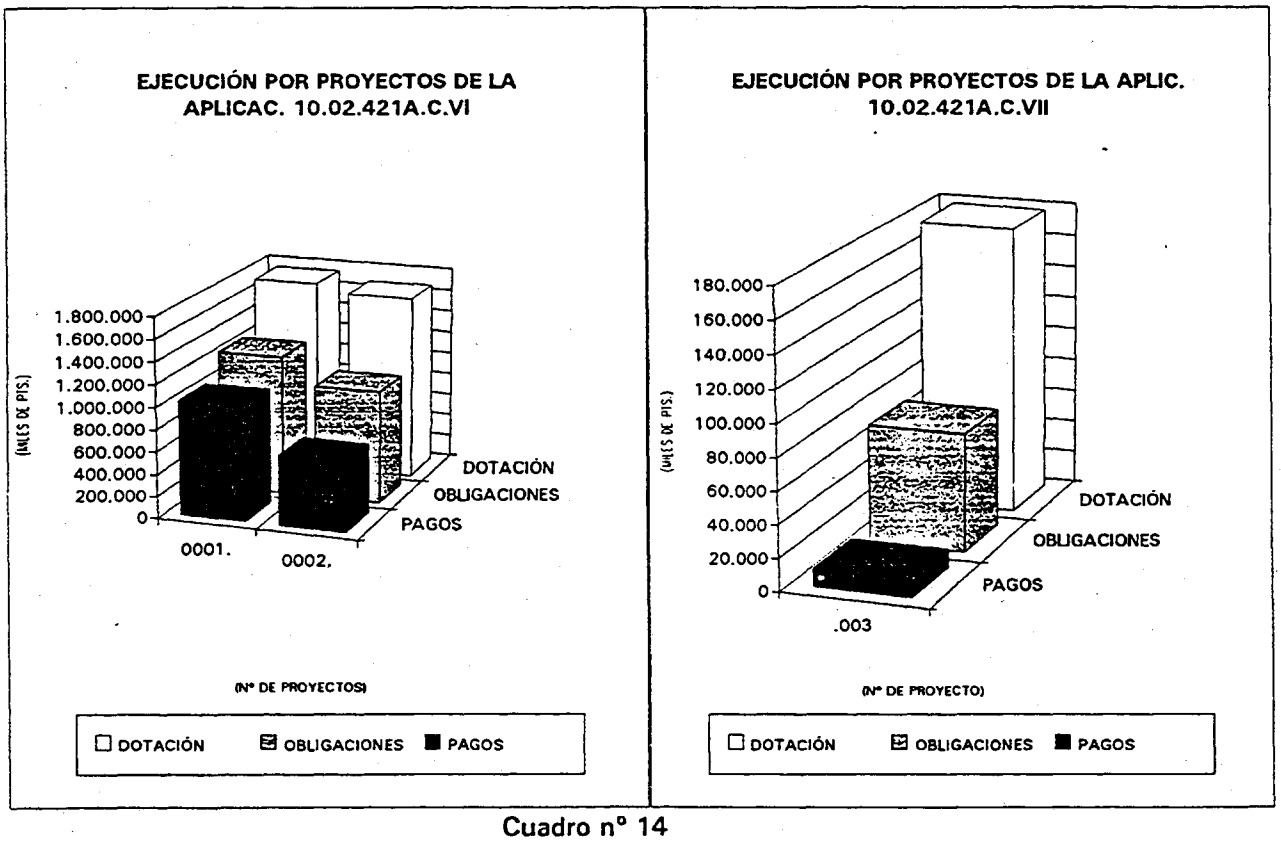
El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación final fue de 65,71% y el de los pagos del 47,07%, considerándose una regular ejecución, ya que es inferior en 18 puntos a la media de la Comunidad en obligaciones reconocidas.

El total de proyectos fue de 3, con un sólo programa, pero contiene varios cientos de expedientes de gasto, y por eso su dificultad en la ejecución.

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 10.02.421A.687 Y 760
PROGRAMA 421A: INFRAESTR. PARA LA REFORMA Y EL DESARROLLO AGRARIO
DOTACIÓN: 3.398.000 (Capítulo VI) y 177.920 (CapítuloVII)

(en miles de pesetas)

Nº PROY/ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECOÑECIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
	CAPÍTULO VI					
0001/90	Concentración Parcelaria	1.736.000	1.258.578	72,50%	1.040.546	59,94%
0002/90	Areas y servic. para creación de infr. rural	1.662.000	1.017.974	61,25%	631.469	37,99%
	TOTAL CAPÍTULO VI	3.398.000	2.276.552	67,00%	1.672.015	49,21%
	CAPÍTULO VII					
0003/90	Mejora Rural	177.920	73.209	41,15%	11.452	6,44%
	TOTAL CAPÍTULO VII	177.920	73.209	41,15%	11.452	6,44%
	TOTAL APLICACIÓN	3.575.920	2.349.761	65,71%	1.683.467	47,08%



Cuadro nº 14

4.2.3.4.- Consellería de Sanidad. (Cuadros números 15, 16 y 17).-

Su dotación representa el 5% de las totales del F.C.I. del 90 de la Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 860.100.000.-

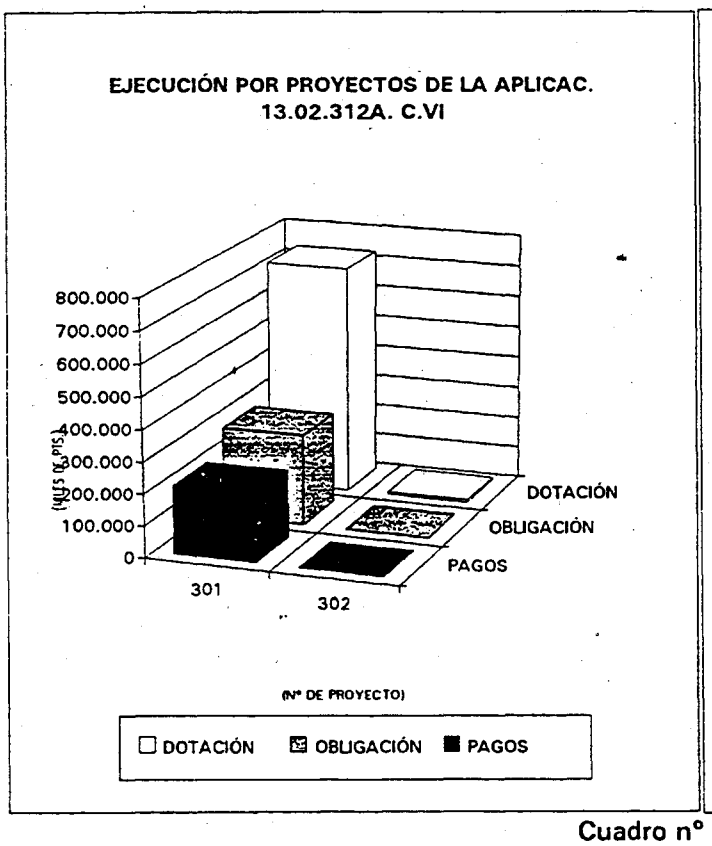
El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación final fue de 41.57% y el de los pagos del 28,06%, considerándose una baja ejecución ya que es inferior en 42 puntos a la media de la Comunidad en obligaciones reconocidas.

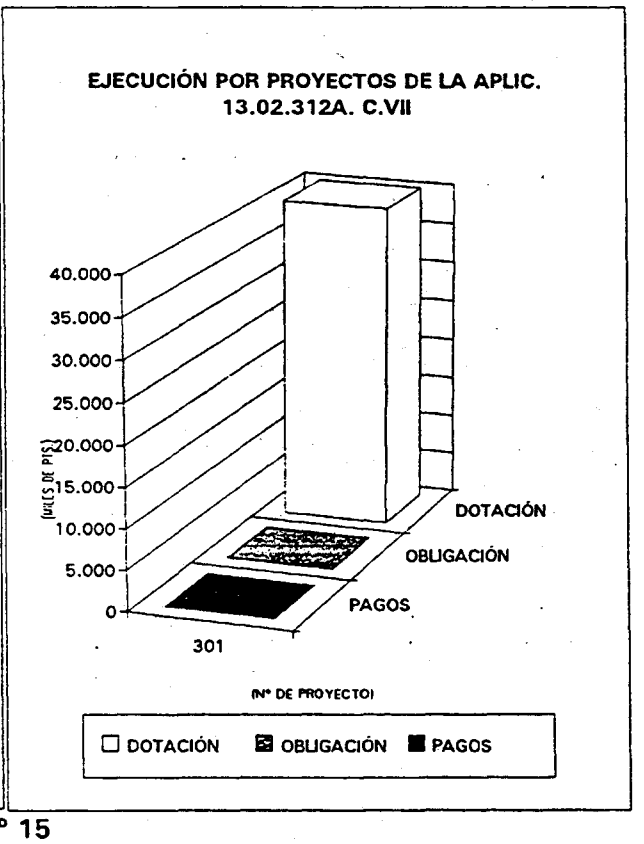
El total de proyectos fue de 6, distribuidos en 3 programas, pero el proyecto 301/90 - Construcción y Equipamiento de Centros de Asistencia Sanitaria, correspondiente a la aplicación presupuestaria 13.02.312A.68 está dotado con Ptas.- 767.500.000.- que representa el 89,23% de la dotación total de la Consellería, cuya ejecución es muy dificultosa, debido fundamentalmente a los largos trámites de construcción de los Centros de Salud (disponibilidad de terrenos adecuados, cesión de los mismos por los Ayuntamientos, redacción de proyectos, etc.).

CONSELLERÍA DE SANIDAD
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 13.02.312A.682 Y 760
PROGRAMA 312A: ASISTENCIA SANITARIA
DOTACIÓN: 735.000 (Capítulo VI) y 40.000 (Capítulo VII)

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
	CAPÍTULO VI					
0301/90	Construcción y equip. centros asist. sanitaria	727.500	289.641	39,81%	215.396	29,61%
0302/90	Adecuación y dotación de centros hospitalarios	7.500	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO VI	735.000	289.641	39,41%	215.396	29,31%
	CAPÍTULO VII					
0301/90	Construcción y equip. centros asist. sanitaria	40.000	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO VII	40.000	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL APLICACIÓN	775.000	289.641	37,37%	215.396	27,79%



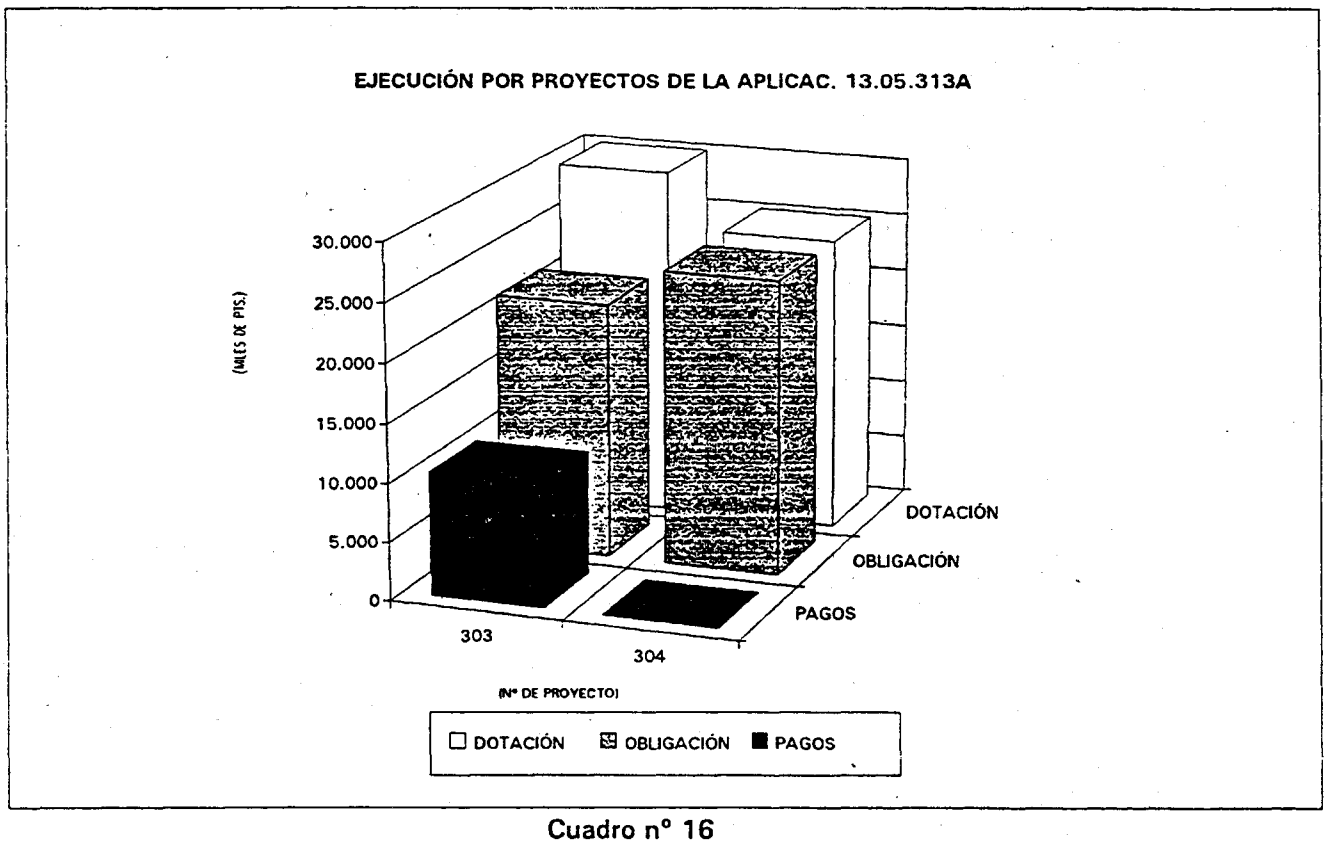


Cuadro nº 15

CONSELLERÍA DE SANIDAD
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 13.05.313A.689
PROGRAMA 313A: PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DOTACIÓN: 55.100

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
303/90	Ley de Sanidad Escolar	30.000	21.750	72,50%	10.564	35,21%
304/90	Programa de prevención del SIDA	25.100	25.085	99,94%	0	0,00%
	TOTAL	55.100	46.835	85,00%	10.564	19,17%

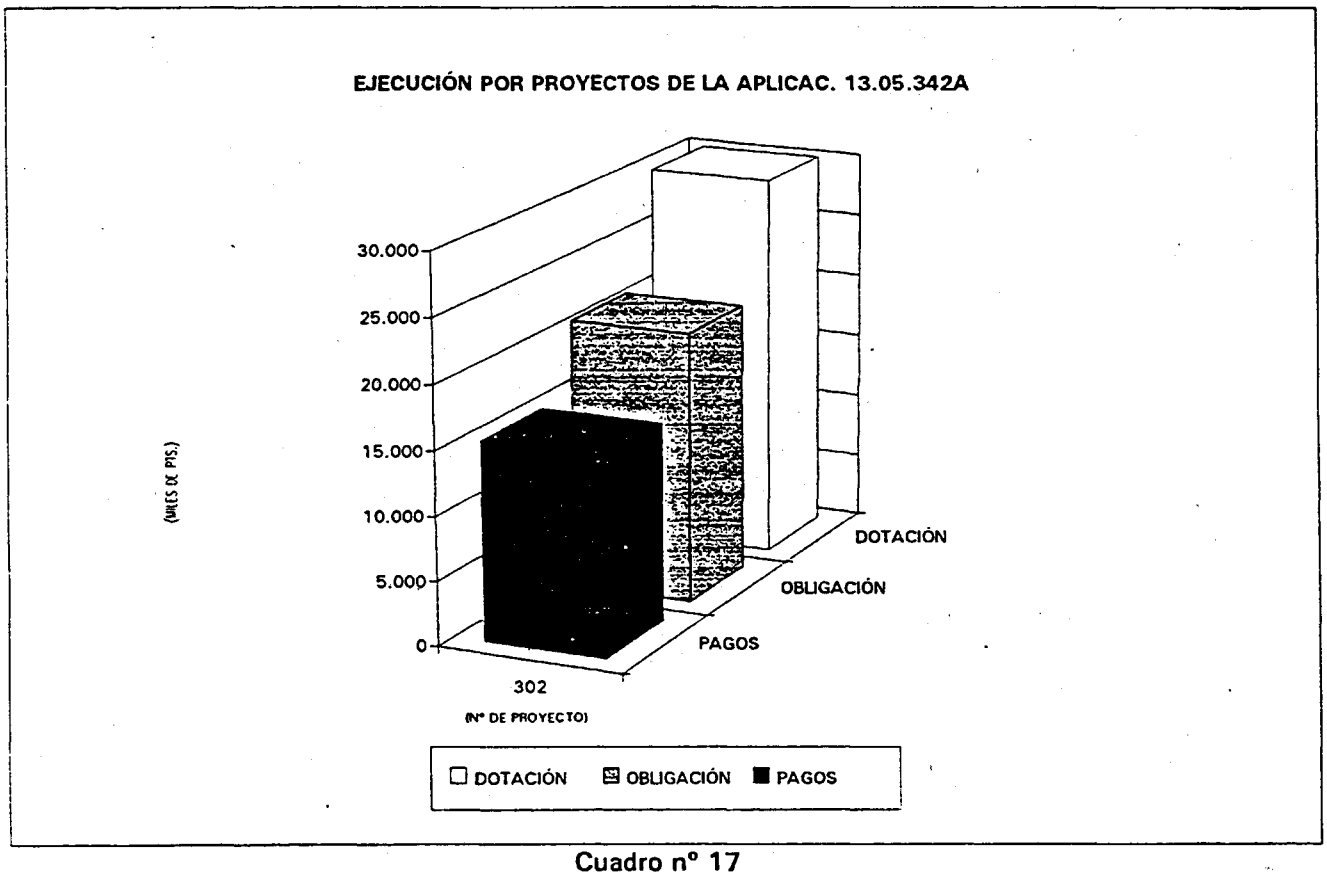


Cuadro nº 16

CONSELLERÍA DE SANIDAD
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 13.05.342A.689.10
PROGRAMA 342A: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
DOTACIÓN: 30.000

(en miles de pesetas)

Nº PROY./ AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
302/90	Programa Renvcag	30.000	21.088	70,29%	15.465	51,55%
	TOTAL	30.000	21.088	70,29%	15.465	51,55%



Cuadro nº 17

4.2.3.5.- Resumen General del grado de ejecución. Ejercicio corriente. (Cuadro nº 18).-

La dotación final del F.C.I. del 90 ascendió a Ptas.-19.445.800.000.- reconociéndose obligaciones por importes de Ptas.-16.287.611.000.- que representa el 83,75% de la dotación, y realizándose pagos por Ptas.-12.476.668.000.- que representa el 64,16% de la dotación.

Estos datos implican que para el ejercicio de 1991 se van a incorporar remanentes de créditos de ejercicios anteriores por importe total de Ptas.-6.818.191.000.- de acuerdo con el siguiente detalle:

Ejercicio Corriente 1990 Miles de Pesetas

	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTE	%
F.C.I. - 90	19.445.800	16.287.611	3.158.189	16,24
F.C.I. Años anteriores	10.486.877	6.826.875	3.660.002	34,90
TOTAL	29.932.677	23.114.486	6.818.191	22,77

(Ver cuadro nº 1 y nº 2)

El saldo de obligaciones reconocidas más las propuestas de pago pendientes de ordenar al 31-12-90 ascienden a 4.666.056.- miles de pesetas, que alivia el déficit de Caja a 31-12-90, pero trasladado al ejercicio de 1991, por lo que a su vez deberá ser compensado con los derechos pendientes de cobro del ejercicio de 1990.

El resumen de obligaciones reconocidas, pagos y pendientes de pagos al 31-12-90 se muestra en el siguiente cuadro:

Ejercicio Corriente 1990.- **Miles de Pesetas**

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGADO	PENDIENTES DE PAGO	%
F.C.I. - 90	16.287.611	12.476.668	3.810.943	23,39
F.C.I. AÑOS ANTERIORES	6.826.875	5.971.762	855.113	12,52
TOTAL	23.114.486	18.448.430	4.666.056	20,18

Las cantidades pendientes de pago al 31-12-90 alcanzan el 20,18% sobre obligaciones reconocidas, lo que se debe fundamentalmente a que las Consellerías emiten documentos O y OK en mayor número en el mes de diciembre que en cualquier otro mes del ejercicio, y además la Orden del 9 de noviembre de 1990 de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio de 1990 en relación con la contabilidad de gastos públicos (D.O.G. número 227, lunes, de 19 de noviembre de 1990), establece que el último día del ejercicio de 1990 en el que se podrán satisfacer libramientos de pago por la Tesorería, será el día 28 de diciembre, y los documentos contables de fase A, D, y O, tienen como fecha límite de entrada en las oficinas contables de las Intervenciones Delegadas, correspondientes a cada Centro Gestor, el día 28 de diciembre. Para los documentos de fase OK la fecha límite de entrada en las citadas oficinas será el 17 de diciembre.

En virtud de lo expuesto, al 31 de diciembre siempre existen cuantías importantes en saldos de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el pago y propuestas de pago pendientes de ordenar.

RESUMEN POR CONSELLERÍAS Y PROGRAMAS DE LA EJECUCIÓN DEL F.C.I. - 1.990 Y AÑOS ANTERIORES

(en miles de pesetas)

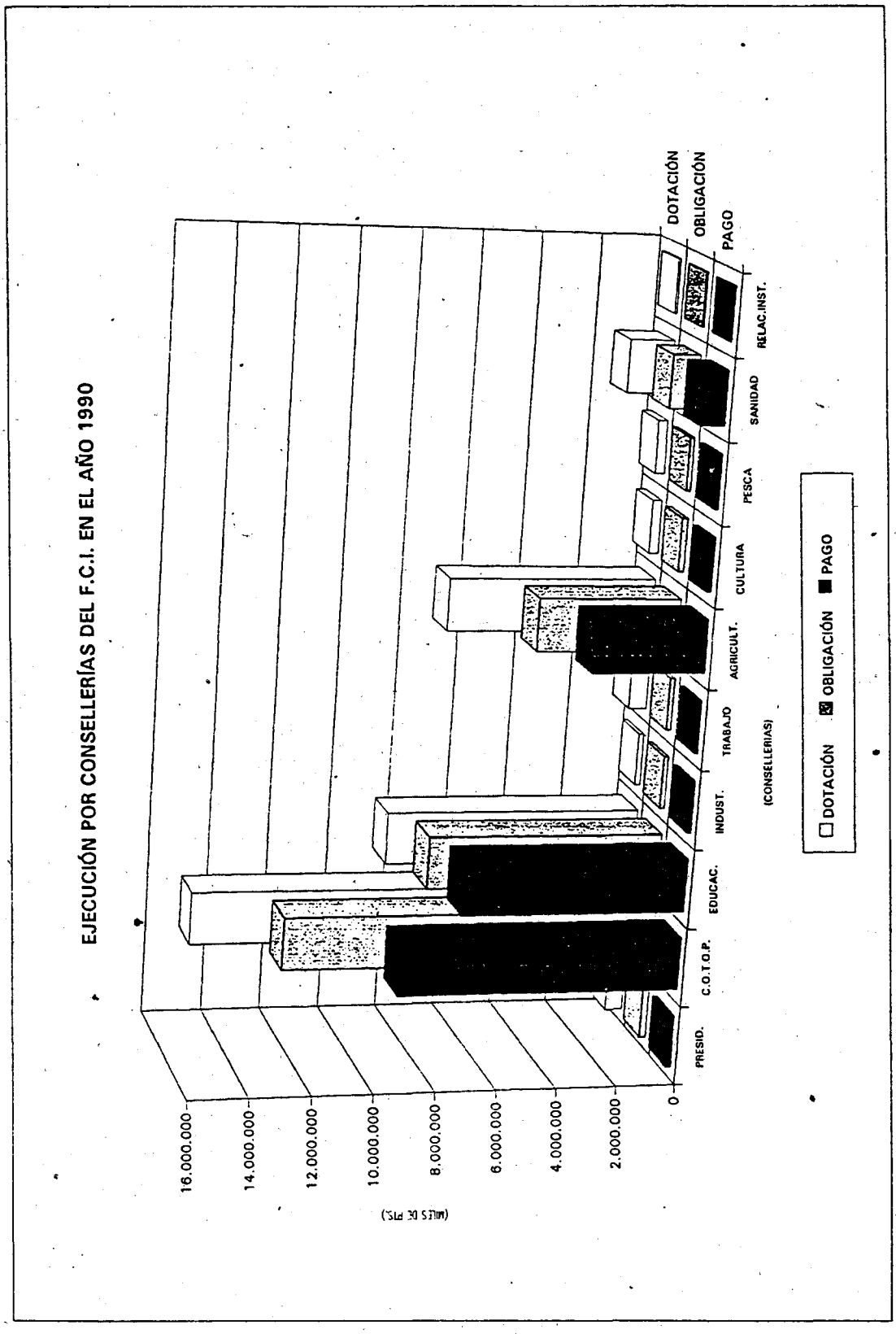
APLIC.PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
04.11.121A .68	105.884	0	0,00%	0	0,00%
04.13.356A .68	386.748	206.200	53,32%	176.144	45,54%
04.14.651A . 68	85.860	11.330	13,20%	10.165	11,84%
TOTAL C.PRESIDENCIA	578.492	217.530	37,60%	186.309	32,21%
06.02.332A .68	310.238	60.143	19,39%	23.104	7,45%
06.02.342A .68	226.308	163.147	72,09%	108.080	47,76%
06.04.412A .68	2.657.119	2.500.462	94,10%	1.592.410	59,93%
06.04.413B .68	4.526.953	4.243.410	93,74%	2.838.918	62,71%
06.04.414A .68	870.810	867.014	99,56%	656.566	75,40%
06.05.413A .68	493.101	487.918	98,95%	424.609	86,11%
06.50.331A .68	5.869.935	4.127.835	70,32%	3.666.554	62,46%
06.50.332A .68	244	161	65,98%	161	65,98%
TOTAL C.O.T.O.P.	14.954.708	12.450.090	83,25%	9.310.402	62,26%
07.01.322A .68	1.361.576	1.164.878	85,55%	1.008.166	74,04%
07.01.322B .68	1.562.478	1.545.727	98,93%	1.544.165	98,83%
07.01.322C .68	1.162.182	1.047.071	90,10%	1.023.781	88,09%
07.01.322E .68	370.792	334.623	90,25%	269.205	72,60%
TOTAL C. EDUCACIÓN	4.457.028	4.092.299	91,88%	3.845.317	86,87%
08.02.342A .68	15.240	15.240	100,00%	15.240	100,00%
08.02.622A .68	67.779	66.719	98,44%	59.961	88,47%
08.02.641A .68	86.389	84.214	97,48%	65.072	75,32%
TOTAL C.INDUSTRIA	169.408	166.173	98,09%	140.273	82,80%
09.02.214B .68	47.760	8.884	18,60%	8.083	16,92%
09.03.212B .68	561.544	151.776	27,03%	108.824	19,38%
TOTAL C. TRABAJO	609.304	160.660	26,37%	116.907	19,19%
10.02.322G .68	45.936	44.530	96,94%	44.530	96,94%
10.02.421A .68	5.291.319	3.668.616	69,33%	2.850.410	53,87%
10.02.421A .76	315.728	152.553	48,32%	75.648	23,96%
10.02.612A .68	164	0	0,00%	0	0,00%
10.03.432A .68	45.431	42.719	94,03%	42.719	94,03%
10.03.613A .68	42.119	38.200	90,70%	36.668	87,06%
10.03.614A .68	159.645	74.585	46,72%	54.818	34,34%
10.04.422A .68	291.796	115.841	39,70%	87.781	30,08%
10.04.422C .68	1.177	1.177	100,00%	1.177	100,00%
10.04.614A .68	782.461	591.827	75,64%	553.003	70,67%
TOTAL C. AGRICULTURA	6.975.776	4.730.048	67,96%	3.746.754	53,03%

RESUMEN POR CONSELLERÍAS Y PROGRAMAS DE LA EJECUCIÓN DEL F.C.I. - 1.990 Y AÑOS ANTERIORES

(en miles de pesetas)

APLIC.PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS / D.FINAL
11.02.354A .68	178.448	76.825	43,05%	72.113	40,41%
11.03.352B .68	41.649	39.421	94,65%	39.421	94,65%
11.03.357A .68	67.506	56.902	84,29%	48.487	71,83%
11.04.356B .681	32.856	12.961	39,45%	12.478	37,98%
TOTAL C.CULTURA	320.459	186.109	58,08%	172.499	53,83%
12.01.614B .68	32.839	0	0,00%	0	0,00%
12.04.614B .68	36.582	14.059	38,43%	12.054	32,95%
12.05.614B .68	8.301	7.165	86,31%	7.165	86,31%
12.06.322G .68	130.969	21.305	16,27%	0	0,00%
12.06.612B .68	102.914	102.901	99,99%	102.901	99,99%
TOTAL C. PESCA	311.605	145.430	46,67%	122.120	39,19%
13.02.312A .68	735.000	289.641	39,41%	215.396	29,31%
13.02.312A .76	40.000	0	0,00%	0	0,00%
13.05.312A .68	324.818	307.409	94,64%	284.129	87,47%
13.05.313A .68	357.998	292.190	81,62%	242.939	67,86%
13.05.342A .68	30.000	21.088	70,29%	15.465	51,55%
TOTAL C. SANIDAD	1.487.816	910.328	56,93%	757.929	46,41%
14.02.361B .68	68.081	55.819	81,99%	49.920	73,32%
TOTAL C. RELAC.INSTITUC.	68.081	55.819	81,99%	49.920	73,32%
TOTAL GENERAL	29.932.677	23.114.486	77,22%	18.448.430	61,63%

Cuadro nº 18



4.2.3.6.- Liquidación Presupuestaria de Ejercicios Anteriores. Resultas de Pagos. (Cuadro nº 19).-

A 1-1-90 las obligaciones pendientes de proponer el pago ascendían a 3.176.060.- miles de pesetas, y las propuestas de pago pendientes de ordenar a 2.316.390.- miles de pesetas, lo que supone un total pendiente de pago a 1-1-90 de 5.492.450.- miles de pesetas. Durante 1990 se realizaron pagos por 5.479.356.- miles de pesetas, estando pendiente de pago al 31-12-90 un importe de 13.094.- miles de pesetas.

Su desarrollo por Consellerías y Programas se muestra en el siguiente cuadro:

F.C.I.- 1990

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES.GASTOS

(MILES DE PTAS.)

Aplicación Presupuestaria	Oblig. Pendientes Pago a 1-1-90	Propuestas Pago Pend. Orden.1-1-90	Pagos Realiz. del 1-1-90 al 31-12-90	Pendiente de Pago a 31-12-90.-
06.02.332A	54.886	31.258	81.361	4.783
06.02.342A	16.626	8.030	24.656	-------
06.03.331A	874	-------	-------	874
06.03.332A	500	-------	-------	500
06.04.412A	1.185.447	269.543	1.454.990	-------
06.04.413B	519.179	889.729	1.408.908	-------
06.04.414A	187.827	231.507	419.334	-------
06.05.413A	46.406	127.146	173.552	-------
06.05.413B	233	-------	-------	233
06.50.331A	44.224	-------	44.224	-------
TOTAL C.O.T.O.P.	**2.056.202**	**1.557.213**	**3.607.025**	**6.390**
07.06.322A	24.126	89.767	113.893	-------
07.06.322B	7.596	18.778	24.660	1.714
07.06.322C	24.507	6.958	31.465	-------
07.06.322E	-------	22.594	22.594	-------
TOTAL EDUCACIÓN	**56.229**	**138.097**	**192.612**	**1.714**
08.02.622A	44.769	269	45.038	-------
08.02.641A	3.143	-------	3.143	-------
08.04.651A	1.637	2.751	4.277	111
TOTAL INDUSTRIA	**49.549**	**3.020**	**52.458**	**111**
09.02.214B	54.351	20.968	74.630	689
09.03.212B	123.035	35.151	158.186	-------
09.04.212B	14.735	844	15.579	-------
TOTAL TRABAJO	**192.121**	**56.963**	**248.395**	**689**
10.02.421A	617.900	184.336	799.069	3.167
10.02.322G	13.665	8.232	21.897	-------
10.03.432A	29.199	-------	29.199	-------
10.03.613A	-------	16.988	16.988	-------
10.03.614A	15.000	40.466	54.650	816
10.04.422A	15.857	9.871	25.728	-------
10.04.614A	51.315	36.290	87.605	-------
TOTAL AGRICULTURA	**742.936**	**296.183**	**1.035.136**	**3.983**
11.02.354A	-------	9.824	9.824	-------
11.03.352B	-------	22.990	22.990	-------
11.03.357A	5.502	42.996	48.295	203
11.04.212B	101	-------	101	-------
11.04.356B	12.708	-------	12.708	-------
TOTAL CULTURA Y JUV.	**18.311**	**75.810**	**93.918**	**203**
12.01.614B	9.003	-------	9.003	-------
12.02.614B	16.016	35.270	51.286	-------
12.03.322G	-------	10.378	10.378	-------
12.03.612A	619	31.872	32.491	-------
TOTAL PESCA	**25.638**	**77.520**	**103.158**	**0**
13.02.313A	4	-------	-------	4
13.05.312A	17.757	11.188	28.945	-------
13.05.313A	17.313	100.396	117.709	-------
TOTAL SANIDAD	**35.074**	**111.584**	**146.654**	**4**
TOTAL GENERAL	***3.176.060***	***2.316.390***	***5.479.356***	***13.094***

Cuadro nº 19

4.2.3.7.- Conclusiones.-

Como resumen del análisis y evaluación del grado de ejecución por la Comunidad Autónoma de Galicia de los proyectos financiados con las dotaciones del ejercicio 1990 y anteriores, en concepto de F.C.I., se deberá resaltar lo siguiente:

a) Las obligaciones reconocidas sobre la dotación final (coincide con la inicial de 19.445.800.- miles de pesetas) del F.C.I. dotado en 1990 representó el 84% y los pagos el 64%, lo que se considera una ejecución muy aceptable, casi excelente.

b) Las obligaciones reconocidas sobre la dotación final del F.C.I. dotado en ejercicios anteriores a 1990 (incorporaciones, transferencias y generaciones) alcanzó el 65% y los pagos el 57%.

c) En conjunto, las obligaciones reconocidas sobre la dotación final del F.C.I. en el presupuesto corriente de 1990 representó el 77,22% y los pagos el 61,63%, lo que se considera una buena ejecución presupuestaria, teniendo en cuenta las dificultades que siempre se presentan en el capítulo VI de Inversiones.

PRESUPUESTO CORRIENTE 1990 Miles de Pesetas

	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ DOT.FINAL	PAGADO	PAGADO/ DOTACIÓN FINAL
F.C.I. - 1990	19.445.800	16.287.611	83,75%	12.476.466	64,16%
F.C.I. - Años anteriores	10.486.877	6.826.875	65,09%	5.971.763	56,94%
SUMA TOTAL	29.932.677	23.114.486	77,22%	18.448.430	61,63%

Por último, hay que resaltar el gran esfuerzo inversor que realizó la Comunidad Autónoma durante 1990, ya que las incorporaciones de ejercicios anteriores representaron el 54% sobre la dotación inicial de 1990 y el 35% del total, y se ejecutó el 65% de lo que no se realizó en ejercicios anteriores a 1990.

Por otra parte, según se pone de manifiesto en el apartado 4.2.3.5. de este informe, el remanente de créditos al 31-12-90 ascendió a 6.818 millones, por lo que las incorporaciones para el ejercicio 1991 disminuyen en 3.669 (10.487-6.818) millones, respecto a las incorporaciones realizadas en 1990, lo que significa que la gestión va mejorando, ya que por una parte se ejecutó mayor volumen de créditos y por otra parte, van disminuyendo las incorporaciones.

El remanente de los 6.818 millones, se descompone de la siguiente forma:

- Créditos no ejecutados de la dotación F.C.I. 90..... 3.158 Millones
- Créditos no ejecutados de las incorporaciones de F.C.I. anteriores a 1990..... 3.660 Millones

SUMA TOTAL REMANENTE AL 31-12-90..... 6.818 Millones

4.3.- Percepción de las dotaciones del F.C.I.-

La percepción de las dotaciones está contemplada en el artículo 10 de la Ley 7/1984, de 31 de marzo, del F.C.I., que en su apartado 2 establece que:

"Tanto los órganos gestores de la Administración Central como las Comunidades Autónomas, de conformidad con los créditos cuya gestión tengan, respectivamente, encomendada, dispondrán de la Tesorería correspondiente a los mismos por cuartas partes, efectuándose los oportunos libramientos dentro de los quince primeros días de cada trimestre por el Servicio mencionado en el apartado anterior, previa solicitud en que se relacionen los datos relativos a las obras ejecutadas, adquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas en el trimestre inmediatamente anterior. Del importe correspondiente a cada libramiento trimestral se deducirán las cantidades transferidas en el trimestre inmediato anterior que no hayan sido utilizadas para satisfacer inversiones efectivas".

De acuerdo con el texto reproducido, los créditos del F.C.I. se pondrán a disposición de las Comunidades Autónomas trimestralmente, dentro de los quince primeros días del trimestre siguiente.

La sentencia del Tribunal Constitucional nº 183/1988 del 13 de octubre declara inconstitucional la parte del artículo 10.2 desde "en que se relacionan" hasta el final. Así mismo la sentencia 63/1986 de 21 de mayo establece que:

"Las Comunidades Autónomas dispondrán de los créditos para los que tengan encomendada la gestión por cuartas partes, que se librarán en los quince primeros días de cada trimestre, previa solicitud".

Por otra parte, en el B.O.E. Nº 310, jueves 27 de diciembre de 1990 se publicó la Ley 29/ 1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial, que en su Disposición Final establece que "surtirá efectos a partir del 1 de enero de 1990", regulando la percepción de las dotaciones en su artículo 7, y en su apartado 4 se establece que para percibir los recursos del Fondo será suficiente con que las Comunidades Autónomas procedan a la petición de los mismos efectuada al Órgano Gestor de los créditos en el Ministerio de Economía y Hacienda.

4.3.1.- Petición de Fondos a la Administración Central.-

Este Consello, mediante escritos números 605, de fecha 29-7-92 y 891 del 24-9-92, solicitó a la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma) la relación de peticiones de fondos efectuada a la Administración Central durante 1990, con distinción de los F.C.Is. por años.

No se pudo verificar si los derechos reconocidos de contraído previo del Presupuesto de Ingresos son o no coincidentes con la citada relación, por lo que en la auditoría que se lleve a cabo para el año 1991 del F.C.I. se revisará y se verificarán los citados extremos.

Por medio de escrito número 1749 de 23 de octubre de 1992 de la Intervención General de la Comunidad Autónoma se dió traslado del escrito número 1782 de 21 de octubre de 1992 de la Dirección General de Planificación y Relaciones con la CEE en el que se relacionan las peticiones solicitadas a la Administración Central durante el ejercicio 1990, siendo éstos los siguientes:

F.C.I.	IMPORTE SOLICITADO
Anterior a 1985	56.419.307.-
1985	80.392.667.-
1986	175.517.780.-
1987	241.755.945.-
1988	1.373.372.575.-
1989	8.066.317.005.-
1990	4.328.054.503.-
Suma Total	**14.321.829.782.-**

4.3.2.- Ingresos del F.C.I. en el ejercicio 1990.-

a). Ejercicio corriente.

La liquidación del Estado de Ingresos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma del ejercicio corriente de 1990, en lo que respecta a los ingresos por el F.C.I., fue preparado por este Consello de Contas a partir del Libro Mayor de Ingresos de la Intervención Delegada de la Consellería de Economía y Hacienda y la Liquidación Presupuestaria de 1990, debiendo tener el siguiente desarrollo:

F.C.I. - 1990 Ejercicio corriente Miles de Pesetas

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS LÍQUIDOS	RECAUDADO (INGRESOS LÍQUIDOS)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 31-12-90
701 - F.C.I. Común.	19.445.800	19.445.800	16.921.450	3.995.132	12.926.318
705 - Otras Transferencias Incondic.	8.099.800	8.099.800	6.749.833	6.749.833	—
SUMA TOTAL	27.545.600	27.545.600	23.671.283	10.744.965	12.926.318

El importe del presupuesto inicial de Ptas.- 27.545.600.000.- es coincidente con el importe que figura en la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, como dotación del F.C.I. y Compensación transitoria para la Comunidad de Galicia.

Las sumas totales concuerdan con la Liquidación Presupuestaria, diferenciándose en los importes parciales de conceptos presupuestarios.

Se hace constar que los derechos pendientes de cobro a 31-12-90 son muy elevados, representando el 66,47% del presupuesto definitivo, por lo que estimamos conveniente que la propia Comunidad sea reiterativa ante la petición de Fondos a la Administración Central y que la Administración Central atienda con prontitud y eficacia las peticiones de Fondos del F.C.I. de la Comunidad de Galicia, con el fin de no ocasionar estrangulamiento en la Tesorería de la Comunidad.

Por otra parte la Comunidad Autónoma deberá agilizar la gestión del presupuesto de gastos en su ejecución de pagos para hacer las correspondientes solicitudes a la Administración Central con la prontitud debida.

b).- Ejercicios cerrados.

La liquidación del Estado de Ingresos del F.C.I. de ejercicios cerrados, durante 1990, tuvo el siguiente desarrollo:

F.C.I. - 1990 Ejercicios Cerrados. Miles de Pesetas

AÑO DE PROCEDENCIA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1-1-90	DERECHOS ANULADOS	RECAUDADO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31-12-90
1989	10.077.358	48.186	10.011.587	17.585
ANTERIORES a 1989	50.361	—	47.442	2.919
SUMA TOTAL	10.127.719	48.186	10.059.029	20.504

Los derechos pendientes de cobro de años anteriores a 1989, en la Liquidación de Ejercicios Cerrados, no están desglosados en la Liquidación de 1990, obteniéndolos este Consello por diferencia con el Mayor de Ingresos.

4.4.- Resultado del F.C.I. en el Ejercicio Económico 1990.-

El artículo 92, apartado 6°, de la Ley 3/1984, del 3 de abril de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia, establece que:

"El resultado del ejercicio económico, de acuerdo con la estructura siguiente:

a) Los saldos de ejecución del presupuesto por obligaciones y derechos reconocidos y por pagos e ingresos realizados.

b) EL déficit o superávit de Tesorería por operaciones presupuestarias, incluyendo las correspondientes al ejercicio vigente y a los anteriores".

A) Ejecución del Presupuesto del F.C.I. 1990.-

Se incluyen todas las operaciones presupuestarias del F.C.I., tanto las correspondientes a operaciones de créditos dotadas en 1990, como las correspondientes a las modificaciones, incluyendo al Organismo Autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo (I.G.V.S.).

Miles de Pesetas

Derechos reconocidos 23.671.283.-
Obligaciones reconocidas..... 23.114.486.-

Superávit de gestión..... 556.797.-

Ingresos..... 10.744.965.-
Pagos..... 18.448.430.-

Déficit de Caja..... 7.703.465.-

El superávit de gestión del F.C.I. en el ejercicio 1990 fue de 556,797 millones de pesetas y el déficit de caja de 7.703,465 millones de pesetas.

Este elevado déficit de caja, se debe a que a 31-12-90 los derechos pendientes de cobro ascendieron a 12.926,318 millones de pesetas.

B) Déficit de Tesorería.

Ejercicio 1990 Miles de Pesetas

INGRESOS PAGOS	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS CERRADOS	TOTALES
INGRESOS	10.744.965	10.059.029	20.803.994
PAGOS	18.448.430	5.479.356	23.927.786
DIFERENCIA	-7.703.465	4.579.673	-3.123.792

La Tesorería del F.C.I. al 31-12-90 presenta un déficit total de 3.123,792 millones de pesetas, correspondiendo al ejercicio corriente un déficit de 7.703,465 millones y a las resultas (ejercicios cerrados) 4.579,673 millones de superávit.

Este déficit de Tesorería, proyectado al futuro del 31-12-90, se ve reducido, ya que si consideramos una previsión de ingresos y gastos en 1991, por el corte efectuado a 31-12-90, aproximadamente podremos calcular un déficit de 1.674 millones, de conformidad con las siguientes previsiones:

	Miles de Pesetas
PREVISIÓN DE PAGOS	IMPORTE
Remanente de crédito al 31-12-90 (Saldos de Presupuesto, Autorizaciones y Disposiciones)	6.818.191.-
Pendientes de Pago al 31-12-90-Ejercicio corriente (Saldo de obligaciones, propuestas de pago pendientes de ordenar y ordenes de pago pendientes)	4.666.056.-
Pendiente de Pago al 31-12-90 de Ejercicios Cerrados	13.094.-
Déficit de Tesorería al 31-12-90	3.123.792.-
TOTAL PAGOS FUTUROS AL 31-12-90	14.621.133.-

	Miles de Pesetas
PREVISIÓN DE INGRESOS	IMPORTE
Derechos pendientes de cobro al 31-12-90	
Ejercicio 1990	12.926.318.-
Ejercicios anteriores	20.504.-
TOTAL DE INGRESOS FUTUROS	12.946.822.-

RESUMEN PREVISIÓN:	Miles de Pesetas
Ingresos futuros del ejercicio 1990	12.946.822
Pagos futuros del ejercicio 1990	14.621.132
Déficit de Tesorería del futuro F.C.I. 1990	1.674.310

Esta previsión supone que todos los remanentes del F.C.I. a 31-12-90 se van a incorporar en 1991 y serán pagados, y las cantidades pendientes de pago a 31-12-90 también serán pagadas y simultáneamente todos los derechos pendientes de cobro serán recaudados y cobrados.

Este déficit futuro de Tesorería no es alarmante, ya que tan sólo representa el 6% del Presupuesto inicial de Ingresos del F.C.I. 1990, pero, teniendo en cuenta su cuantía absoluta, se hace necesario insistir en las peticiones de fondos a la Administración Central para que haga las reposiciones de las transferencias de fondos con la debida prontitud, de acuerdo con lo que determina la nueva Ley del F.C.I. (Artigo 7°, apartado 4°, de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, B.O.E. núm 310, del 27 de diciembre de 1990).

Este déficit se debe fundamentalmente a que los derechos reconocidos son inferiores a las previsiones presupuestarias en 1990 en 3.874.317.- miles de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

	Miles de Pesetas
Presupuesto Inicial de Ingresos.....	27.545.600
Derechos Reconocidos Líquidos.....	23.671.283
Diferencia.....	3.874.317

Asimismo la dotación final del F.C.I. en 1990 (créditos iniciales más incorporaciones y generaciones) supera al presupuesto definitivo de ingresos en 2.377.077.- miles de pesetas, de conformidad con lo que a continuación se relaciona:

Ejercicio corriente 1990	Miles de Pesetas
Presupuesto de Gastos - Dotación final	29.932.677
Presupuesto de Ingresos - Definitivo	27.545.600
Diferencia	2.377.077

5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.-

Se realizó una verificación y evaluación del grado de cumplimiento de la legalidad de la contratación administrativa de los proyectos financiados con el F.C.I., de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, Decreto 395/1990 del 14 de junio sobre contratación directa de obras y suministros de la Xunta de Galicia (D.O.G.n° 148, del 30 de julio de 1990), analizando fundamentalmente los apartados:

- Autorización del expediente y el sistema de contratación.
- Pliego de cláusulas administrativas y resolución aprobatoria del mismo.
- Informe de la Asesoría Jurídica.
- Certificado de existencia de crédito.
- Propuesta de gasto y fiscalización de la Intervención.
- Convocatoria de la contratación.
- Acta de la Mesa de Contratación.
- Documentos de las empresas concursantes.
- Resolución de la adjudicación.
- Contrato Administrativo o Público.
- Fianza definitiva.
- Acta de Replanteo.
- Actas de recepción provisional y definitiva.

La muestra elegida comprendió el 39% de las aplicaciones presupuestarias a nivel de subconcepto, con un volumen económico de los proyectos de inversión del 66% sobre el total de créditos definitivos de 29.932.677.- miles de pesetas (19.445.800.- miles de pesetas de dotaciones iniciales y 10.486.877.- miles de pesetas de incorporaciones y generaciones de créditos de ejercicios anteriores).

Esta muestra consta de 862 contratos con un volumen económico total de 42.829.410.- miles de pesetas, ya que en el caso de las incorporaciones de créditos se realizó sobre el contrato en origen, superando por tanto las dotaciones de créditos finales del ejercicio 1990.

En el cuadro CA-1 se muestra el número de contratos, tipo de contratos e importe por Consellerías y en el cuadro CA-2 se muestra el número de contratos, forma de adjudicación e importe por Consellerías.

Los contratos de Obras son los más característicos de la muestra seleccionada, representando el 50% de los contratos y el 97% del importe total de la muestra. Respecto a la forma de adjudicación, el 79% se realizó por Concurso, el 6% por Subasta, el 9% por adjudicación Directa y el 6% por la propia Administración.

Como se observa, el sistema de contratación más empleado fue el de Concurso y aunque la Ley 4/1990 del 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, en su artículo 14, entre otras modificaciones a la Ley de Contratos, varía el texto de sus artículos 28 y 35, colocando en plano de igualdad los sistemas de Subasta y Concurso para el contrato de Obras, se deberá procurar el uso del sistema de Subasta, ya que sin incurrir en bajas temerarias, se obtienen condiciones económicas más ventajosas.

La subasta fue muy empleada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes, con 47 contratos por importe total de 1.884 millones, lo que representa el 33% del su inversión de F.C.I. La Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas lo utilizó en 6 contratos por importe de 733 millones y la Consellería de Sanidad en un contrato de 25 millones, no habiendo sido utilizado por las demás Consellerías. Las bajas oscilaron alrededor del 20%, no encontrando presunta temeridad en las adjudicaciones.

Se debe señalar, como efecto positivo, que no hubo un exceso de contratación directa, lo que demuestra que se realizó una buena previsión y planificación al no hacer abuso de este sistema de adjudicación y además no fueron observados posibles fraccionamientos de un objeto total en varios contratos parciales. Únicamente las Consellerías de Ordenación del Territorio y Obras Públicas con 57 contratos, por importe total de 2.026 millones; Agricultura, Ganadería y Montes con 71 contratos, por importe total de 935 millones y Sanidad con 247 contratos, por importe total de 235 millones son los que más emplearon este sistema de contratación.

Asimismo se hace constar que en otras áreas el análisis de la contratación administrativa es más detallada, ya que este informe sólo se refiere al F.C.I.

CONTRATOS EXAMINADOS - 1.990 F.C.I.

CONSELLERÍA \ CONTRATO		OBRAS		SUBMINISTRACIÓNS			ASIST. TÉCNICA			OUTROS			TOTAIS		
	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%
C. da Presidencia e A. P.	12	513.590.165	1,23	0	0	0,00	14	21.541.534	3,30	0	0	0,00	26	535.131.699	1,25
C.O.T. e Obras Públicas	101	27.795.335.511	66,64	1	31.480.736	8,17	30	210.106.390	32,20	61	83.953.319	99,26	193	28.120.875.956	65,66
C. de Educación e Ord. Univ.	15	4.507.570.296	10,81	0	0	0,00	1	4.847.951	0,74	0	0	0,00	16	4.512.418.247	10,54
C. de Industria e Comercio	7	425.644.536	1,02	0	0	0,00	1	3.181.528	0,49	0	0	0,00	8	428.826.064	1,00
C. de Traballo e Servicios Social	32	756.481.396	1,81	0	0	0,00	26	39.523.615	6,06	0	0	0,00	58	796.005.011	1,86
C. de Agricultura, G. e Montes	205	5.540.282.287	13,28	6	37.882.187	9,84	18	163.132.785	25,00	0	0	0,00	229	5.741.297.259	13,41
C. de Cultura e Xuventude	16	776.957.644	1,86	0	0	0,00	16	165.621.416	25,39	0	0	0,00	32	942.579.060	2,20
C. de Pesca, Marisqueo e Ac.	20	526.206.230	1,26	2	400.000	0,10	1	14.863.826	2,28	0	0	0,00	23	541.470.056	1,26
C: de Sanidade	17	834.730.156	2,00	201	243.094.450	63,12	52	16.763.769	2,57	1	630.000	0,74	271	1.095.218.375	2,56
C: de Relacións Institucionais	2	30.462.190	0,07	2	72.286.600	18,77	2	12.839.040	1,97	0	0	0,00	6	115.587.830	0,27
TOTAL CONSELLERÍAS	427	41.707.260.411	100,00	212	385.143.973	100,00	161	652.421.854	100,00	62	84.583.319	100,00	862	42.829.409.557	100,00

CA-1

CONTRATOS EXAMINADOS - 1.990 F.C.I.

ONSELLERÍA \ ADXUDICACIÓN	CONCURSO			POXA			ADX. DIRECTA			ADMÓN.			OUTROS			TOTAIS		
	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%
C. da Presidencia e A. P.	8	473.902.268	1,41	0	0	0,00	18	61.229.431	1,59	0	0	0,00	0	0	0,00	26	535.131.699	1,25
C.O.T. e Obras Públicas	62	25.249.918.025	75,35	6	732.528.223	27,74	57	2.026.428.199	52,47	2	9.298.190	0,34	66	102.703.319	100	193	28.120.875.956	65,66
C. de Educación e Ord. Univ.	14	4.379.551.680	13,07	0	0	0,00	2	132.866.567	3,44	0	0	0,00	0	0	0,00	16	4.512.418.247	10,54
C. de Industria e Comercio	5	349.972.594	1,04	0	0	0,00	3	78.853.470	2,04	0	0	0,00	0	0	0,00	8	428.826.064	1,00
C. de Traballo e Serv. Sociais	13	629.506.110	1,88	0	0	0,00	45	166.498.901	4,31	0	0	0,00	0	0	0,00	58	796.005.011	1,86
C. de Agricultura, G. e M.	6	337.890.960	1,01	47	1.883.579.315	71,33	71	935.127.798	24,21	105	2.584.699.186	95,25	0	0	0,00	229	5.741.297.259	13,41
C. de Cultura e Xuventude	14	832.062.115	2,48	0	0	0,00	18	110.516.945	2,86	0	0	0,00	0	0	0,00	32	942.579.060	2,20
C. de Pesca, Marisqueo e Ac.	4	421.471.685	1,26	0	0	0,00	2	400.000	0,01	17	119.598.371	4,41	0	0	0,00	23	541.470.056	1,26
C: de Sanidade	23	835.698.893	2,49	1	24.687.637	0,93	247	234.831.845	6,08	0	0	0,00	0	0	0,00	271	1.095.218.375	2,56
C: de Relacións Institucionais	0	0	0,00	0	0	0,00	6	115.587.830	2,99	0	0	0,00	0	0	0,00	6	115.587.830	0,27
TOTAL CONSELLERÍAS	149	33.509.974.330	100	54	2.649.795.175	100	469	3.862.340.986	100	124	2.713.595.747	100	66	102.703.319	100	862	42.829.409.557	100

CA-2

5.1.- Consellería de la Presidencia y Administración Pública.-

La muestra elegida fue de 26 contratos, con un volumen económico de 535 millones de pesetas, representando el 1,25% del importe total de la muestra, de los que 8 contratos se adjudicaron por Concurso, por un importe de 474 millones y 18 por Adjudicación Directa por un importe de 61 millones.

Del total de contratos, 12 corresponden a Obras por importe de 514 millones y 14 a Asistencia Técnica por importe de 21 millones.

Respecto a la documentación solicitada por este Consello, la Secretaría General para el Deporte en escrito nº 2.851 del 25-9-92 nos manifiesta que no realizaba contratos de Asistencia Técnica para las Direcciones de Obra, ya que únicamente procedía al nombramiento del técnico correspondiente, aunque en la actualidad suscriben el oportuno contrato según explican en el citado escrito.

Por otra parte cumplimentó toda la documentación solicitada por este Consello.

5.2.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.-

La muestra elegida fue de 193 contratos con un importe de 28.121 millones de pesetas, representando el 65,66% del importe total de la muestra, de los que 62 contratos se adjudicaron por Concurso, por importe de 25.250 millones de pesetas; 6 por Subasta, por un importe de 733 millones; 57 por Adjudicación Directa, por importe de 2.026 millones; 2 por Administración por 9 millones y 66 correspondientes en su mayor parte a expropiaciones por importe de 103 millones.

Del total de contratos de la muestra, 101 corresponden a Obras, por importe de 27.795 millones, 1 a Suministros, por importe de 31 millones; 30 a Asistencia Técnica, por importe de 210 millones y 61 a otros, por importe de 84 millones.

Con el ánimo de ejecutar el presupuesto del ejercicio corriente, se imputaron y contabilizaron indebidamente documentos "O" de Obligaciones Reconocidas en las fechas finales del ejercicio 1990, de reformados formalizados en 1991, pudiendo considerarse un error de fechas al tener que expedir las certificaciones de obras con posterioridad a la firma del contrato, y emitirse los documentos "O" con fecha 28 de diciembre de 1990, cuyo detalle es el siguiente:

Aplic. Presup.	L. Mayor		Importe Doc."O"	Exped./ proyecto	Fecha formaliza. contrato	Fecha certif.	Empresa Adjudicataria
	Año	Data					
06.50.331A.682.10	8888	28-12-90	80.715.899	C-90/502	14-2-91	14-02-91	D. y C.
06.50.331A.682.10	8886	28-12-90	119.834.248	C-90/502	14-2-91	14-02-91	D. y C.
06.50.331A.682.10	8855	28-12-90	53.606.116	LU-88/020	04-1-91	14-12-90	Temac

El expediente C-90/502 se engloba en los proyectos de código 602 y 607 incluidos en la relación de proyectos que integran el F.C.I.-1.990.

El expediente LU-88/020 se engloba en el proyecto de código 606 incluido en la relación de proyectos que integran el F.C.I.-1.990.

Asimismo, en los expedientes M/PO/87.3 y M/OUR/85.4.1. no se celebraron contratos con Telefónica y Fenosa en el primero de ellos y con Fenosa en el segundo, contestando la Consellería que por tratarse de servicios afectados no se celebran los mismos y que el proyecto técnico redactado por las compañías afectadas es aprobado por la Dirección General de Obras Públicas, sirviendo de base para el pago de certificaciones. Se recomienda que se celebren los correspondientes contratos administrativos y que en lo sucesivo se abstengan de expedir documentos ADOK sin el correspondiente contrato.

5.3.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.-

La muestra elegida fue de 16 contratos con un volumen económico de 4.512 millones de pesetas, representando el 10,54% del importe total de la muestra, de los que 14 contratos se adjudicaron por Concurso por un importe de 4.380 millones y 2 por Adjudicación Directa por un importe de 133 millones.

Del total de contratos de la muestra, 15 corresponden a Obras, por un importe total de 4.508 millones y 1 a Asistencia Técnica, por un importe total de 5 millones.

El cumplimiento legal es satisfactorio, enviando a este Consello toda la documentación solicitada.

5.4.- Consellería de Industria y Comercio.-

La muestra elegida fue de 8 contratos, con un volumen económico de 429 millones de pesetas, representando el 1% del importe total de la muestra, de los que 5 contratos se adjudicaron por Concurso, por un importe de 350 millones, y 3 por Adjudicación Directa por un importe de 79 millones.

Del total de contratos de la muestra 7 corresponden a Obras, por importe de 426 millones, y 1 a Asistencia Técnica por importe de 3 millones.

El cumplimiento legal es satisfactorio, habiendo enviado a este Consello toda la documentación solicitada.

5.5.- Consellería de Trabajo y Servicios Sociales.-

La muestra elegida fue de 58 contratos con un volumen económico de 796 millones de pesetas, representando el 1,86% del importe total de la muestra; de los que 13 contratos se adjudicaron por Concurso por un importe de 630 millones, y 45 por Adjudicación Directa por un importe de 166 millones.

Del total de contratos de la muestra, 32 corresponden a Obras por un importe de 756 millones y 26 a Asistencia Técnica por importe de 40 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio, habiendo enviado a este Consello toda la documentación solicitada.

5.6.- Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes.-

La muestra elegida fue de 229 contratos con un volumen económico de 5.741 millones de pesetas, representando el 13,41% del importe total de la muestra; de los que 6 contratos se adjudicaron por Concurso por un importe de 338 millones, 47 por Subasta por un importe de 1.884 millones, 71 por Adjudicación Directa por importe de 935 millones y 105 por la propia Administración por importe de 2.585 millones.

Del total de contratos de la muestra, 205 corresponden a Obras por importe de 5.540 millones, 6 a Suministros por 38 millones y 18 a Asistencia Técnica por 163 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio, habiendo enviado a este Consello toda la documentación solicitada.

5.7.- Consellería de Cultura y Juventud.-

La muestra elegida fue de 32 contratos con un volumen económico de 943 millones, representando el 2,20% del importe total de la muestra; de los que

14 contratos se adjudicaron por Concurso por importe de 832 millones y 18 por Adjudicación Directa por importe de 111 millones.

Del total de contratos de la muestra, 16 corresponden a Obras por un importe de 777 millones y 16 de Asistencia Técnica por importe de 166 millones.

El cumplimiento legal se considera muy satisfactorio, enviando a este Consello toda la documentación solicitada.

5.8.- Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.-

La muestra elegida fue de 23 contratos con un volumen económico de 541 millones, representando el 1,26% de la muestra; de los que 4 se adjudicaron por Concurso por un importe de 421 millones, 17 por la Administración por 120 millones y 2 por Adjudicación Directa (gastos menores) por 0,4 millones.

Del total de contratos de la muestra, 20 corresponden a Obras por un importe de 526 millones, 2 a Suministros por 0,4 millones y 1 a Asistencia Técnica por 15 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio, enviando a este Consello toda la documentación solicitada.

5.9.- Consellería de Sanidad.-

La muestra elegida fue de 271 contratos con un volumen económico de 1.095 millones de pesetas, representando el 2,56% del importe total de la muestra, de los que 23 Contratos se adjudicaron por Concurso por importe de 836 millones, 1 por Subasta por importe de 25 millones y 247 por Adjudicación Directa por importe de 235 millones.

Del total de contratos de la muestra, 17 corresponden a Obras por importe de 835 millones, 201 a Suministros por 243 millones, 52 a Asistencia Técnica por 17 millones y 1 a otros por 0,6 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio en todos los expedientes auditados, habiendo remitido a este Consello toda la documentación solicitada.

5.10.- Consellería de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno.-

La muestra elegida fue de 6 contratos con un volumen económico de 116 millones de pesetas, representando el 0,27% de la muestra, adjudicándose todos por el sistema de Adjudicación Directa.

Del total de contratos de la muestra, 2 corresponden a Obras por importe de 30 millones, 2 a Suministros por importe de 72 millones y 2 a Asistencia Técnica por importe de 13 millones.

5.11.- Recomendaciones a la Contratación Administrativa.-

Con carácter general este Consello estima conveniente realizar las siguientes recomendaciones sobre la contratación administrativa del F.C.I.:

1º). Independientemente de que los expedientes de contratación que guardan las Intervenciones Delegadas de las Consellerías estén siempre completos, las respectivas unidades administrativas de gestión deben guardar siempre el expediente completo en original o copias auténticas, o, en todo caso, con fotocopias debidamente compulsadas, conjuntamente con los documentos presupuestarios de ejecución A,D,O,K y toda su documentación de apoyo (aprobación del expediente y del gasto, fiscalización, actas de la mesa, resoluciones, documentación de las empresas adjudicatarias, contratos, actas de replanteo, fianzas definitivas, certificaciones de obras, minutas de honorarios, facturas, etc.).

2º). En la elaboración y formalización de los contratos, se tendrá especial cuidado en detallar claramente las anualidades y las claves presupuestarias de imputación del gasto, debiendo consignar los importes correspondientes por claves de financiación e imputación del gasto que permita un correcto seguimiento a los órganos gestores de la ejecución presupuestaria y su conciliación con el Mayor de Conceptos Presupuestarios.

En la práctica, al no constar en el contrato los importes distribuidos por claves presupuestarias de imputación del gasto y de su financiación, los gestores gozan de plena libertad para la imputación del coste de los proyectos por claves presupuestarias, con la única limitación global de la dotación presupuestaria, lo que origina que en un proyecto cofinanciado una certificación sea desglosada e imputada a dos o tres claves presupuestarias distintas (F.C.I., FEDER y Comunidad Autónoma) y además muchas veces se originan rectificaciones de documentos ADOK en positivo o negativo, en formalización y sin movimiento de fondos (por error, algunos se hicieron en efectivo, aunque se contabilizaron en formalización).

3º). Se deben evitar los cambios en las anualidades inicialmente previstas en los contratos, ya que con carácter general, dicho cambio de anualidades presupone un error de cálculo en la previsión de la ejecución del "planing" de obra, lo que a su vez está distorsionando la financiación condicionada prevista en el Presupuesto de Ingresos, dando lugar, por los retrasos, a futuras incorporaciones de créditos y, por los adelantos, al cambio de dotación del crédito inicial del Presupuesto de Gastos.

4º). Se debe evitar la concesión de prórrogas en la ejecución a los contratistas y los posibles reformados, con el fin de que las obras ejecutadas entren en servicio en el plazo inicialmente previsto, y que los criterios técnicos y económicos que fundamentaron la adjudicación inicial no se vean alterados con posterioridad. Sólo en casos muy excepcionales se debe conceder la prórroga (art. 45 de la Ley de Contratos del Estado).

5º). Con el fin de que los gestores tengan una buena información de la ejecución presupuestaria en tiempo real, es conveniente que sigan utilizando el Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios, lo que les permite una visión globalizada de la situación administrativa en la que se encuentran los expedientes de contratación.

6º). Sería conveniente que se estableciesen unos Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales, informados favorablemente por la Asesoría Jurídica de la Xunta, para todas las Consellerías, con el fin de obtener una mejor coordinación administrativa y evitar que los Servicios de Contratación de cada Consellería tengan que elaborar periódicamente los suyos propios.

6.- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

PUNTOS DÉBILES.RECOMENDACIONES.-

El segundo objetivo del control realizado por este Consello de Contas fue evaluar el control interno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, en lo que respecta a la coordinación, control y seguimiento del F.C.I., con referencia a los objetivos genéricos de eficiencia y eficacia, y a la exigencia que específicamente establece la normativa legal del Fondo en cuanto a contabilidad analítica que tiene que soportar la imputación de costes a cada uno de los proyectos.

Como consecuencia de esta evaluación del control interno, en los aspectos anteriormente relacionados, se exponen a continuación los puntos débiles detectados y las recomendaciones que este Consello formula con objeto de mejorarlos.

6.1.- Dotaciones iniciales del F.C.I. de 1990.-

Existen algunas diferencias entre las dotaciones iniciales aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 1990 y las que figuran en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el mismo ejercicio, correspondientes a la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas y Educación y Ordenación Universitaria, como se indica en el apartado 4.2.2 de este informe.

6.2.- Modificaciones de proyectos.-

Las modificaciones de proyectos hay que realizarlas de acuerdo con los requisitos formales establecidos en el artículo 7, apartado 4°, de la Ley 7/1984 del 31 de marzo del F.C.I.

La relación de proyectos facilitada por la Dirección General de Planificación y Relaciones con la C.E.E. no concuerda exactamente con la facilitada por las Consellerías de Ordenación del Territorio y Obras Públicas y la de Educación y Ordenación Universitaria.

En la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas se detectaron los proyectos números 520-Obras de abrigo en Meloxo y 521-Obras infraestructura Burela, correspondientes a la aplicación presupuestaria 06.04.414A, que computan obligaciones reconocidas y pagos superiores a las dotaciones asignadas en el Fondo. Así mismo en el proyecto 519 - Muelle en Cangas, se especifican pagos por 9.082 miles de pesetas que no se corresponden con la relación enviada por la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas (C.O.T.O.P.).

Este Consello recomienda que no sean computados a efectos de la ejecución del F.C.I., proyectos o créditos de proyectos que no estén contemplados en las asignaciones del Fondo con anterioridad a la aprobación formal, por los órganos competentes, de las modificaciones necesarias.

Asimismo se dirigieron escritos a las Consellerías de Educación y Ordenación Universitaria (escrito n° 895 de fecha 28-9-92) y a la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas (escrito 894 de fecha 28-9-92) solicitando la documentación de las sustituciones producidas en los proyectos (propuesta de la Consellería, acuerdo del Consello de la Xunta y conformidad del Comité de Inversiones Públicas), aportando la citada documentación la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.

6.3.- Control sobre el grado de ejecución de los proyectos.-

Según se indicó en el apartado 1.2 del informe, la Ley del F.C.I. establece que para facilitar el control parlamentario, se lleve una contabilidad analítica de los costes imputables a cada proyecto y las unidades físicas de realización del mismo que resulten más significativas.

La Comunidad Autónoma sólo lleva contabilidad presupuestaria, no habiendo implantado la contabilidad financiera ni la analítica, por lo que la información que se obtiene es a través del Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios y de la Liquidación Presupuestaria, no suministrando información sobre los proyectos de inversión individualizados correspondientes al F.C.I., y las dotaciones de estos proyectos no se consideran independientemente, ya que dentro del artículo 68 (contabilización del F.C.I. del capítulo VI) se separa a nivel de subconceptos o partida el año de procedencia del F.C.I., pero con la suma total de todos los proyectos a nivel de aplicación presupuestaria (Sección-Servicio-Programa-Subconcepto del artigo 68).

Esta circunstancia es muy importante ya que las dotaciones del F.C.I. financian sólo parcialmente el presupuesto total de los distintos proyectos individuales por lo que, en la práctica, en la contabilización de los documentos OK se desglosan las certificaciones de obras y minutas de honorarios por aplicaciones presupuestarias de imputación según la clave de financiación (Comunidad Autónoma, F.C.I.. FEDER) lo que dificulta muchísimo un adecuado seguimiento de los proyectos, por lo que es muy urgente implantar el subsistema de proyectos de inversión para que contablemente (contabilidad financiera, presupuestaria y analítica) pueda efectuarse un seguimiento de los diferentes proyectos asignados al F.C.I.

Por otra parte, es recomendable que los gestores del F.C.I. de las distintas Consellerías establezcan un control mínimo con carácter mensual de los expedientes de los proyectos y la contabilidad presupuestaria, con cuadres periódicos del Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios.

6.4.- Percepción de las dotaciones del F.C.I.-

De acuerdo con lo que determina el artículo 10, apartado 2, de la Ley 7/1984, del 31 de marzo, del F.C.I. la Administración Autonómica solicitará a la Administración Central las peticiones de fondos, relacionando los datos relativos a las obras ejecutadas, adquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas en el trimestre anterior.

Es absolutamente necesario que, con el fin de reducir el déficit de caja y de tesorería provocado por el F.C.I., se reduzcan los períodos medios entre las peticiones y los cobros, para que la Administración Autonómica disponga de una financiación más próxima a las obligaciones contraídas por inversiones, por lo que la Administración Central deberá agilizar al máximo los pagos por F.C.I. de la Comunidad de Galicia y la Administración Autonómica ejecutar más rápidamente los proyectos para realizar la petición trimestral de conformidad con los pagos realizados en el trimestre anterior.

6.5.- Contabilización de los Ingresos.-

Según se ha puesto de manifiesto en el apartado 4.3.2. el Estado de Ingresos del ejercicio corriente de 1990 contiene un error a nivel de subconcepto, ya que se contabilizaron los ingresos de la compensación transitoria en el concepto 701 en vez de en el concepto 703 por importe de 6.749.833 miles de pesetas, pero en conjunto la suma total es correcta.

Es de destacar que la diferencia entre el presupuesto definitivo y los derechos reconocidos es de 3.874.317 miles de pesetas de menos en derechos reconocidos líquidos, siendo la diferencia en las previsiones de 8.099.800 miles de pesetas en el concepto 703 y un exceso de los derechos reconocidos de 4.225.483 miles de pesetas en el concepto 701.

Se recomienda un control extracontable que permita identificar exactamente la cantidad pagada por proyecto y la cobrada de la Administración

Central por cada uno de ellos de forma individualizada, con el fin de poder permitir un control financiero singularizado por proyecto.

Es de aplicación la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda del 1 de diciembre de 1989, por la que se implanta el nuevo sistema de información contable en la Administración de la Xunta de Galicia (D.O.G. nº 238 del jueves 14 de diciembre de 1989).

Para futuros ejercicios, en la contabilización de los derechos reconocidos de contraído previo, también podrán utilizarse simultáneamente otros criterios en base a lo que determina el apartado 2º del artículo 7 de la Ley 29/1990 del 26-12 del F.C.I. (B.O.E. 310 del 27 de diciembre de 1990), ya que se debe de tratar que los derechos reconocidos pendientes de cobro al final del ejercicio (31-12) respondan a una situación real, y que sirva de estímulo para una eficaz gestión de cobro.

Este apartado ha sido modificado al tenerse en cuenta las alegaciones de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

6.6.- Formalización de documentos contables.-

Uno de los objetivos de la presente fiscalización es la verificación, para una muestra de proyectos, de la existencia y adecuación de la documentación justificativa de las fases de ejecución presupuestaria de créditos comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y pagos realizados.

La documentación relativa a las fases A,D,O,K fue realizada con visitas a las propias Consellerías y con la petición por escrito de documentación diversa relativa tanto a la contratación administrativa en sí, como su ejecución presupuestaria en las fases A,D,O,K. Las incidencias detectadas se hacen constar en el apartado 5 de contratación administrativa, por cada Consellería (apartados 5.1 al 5.10).

Con carácter general la documentación contable revisada está adecuadamente sustentada y formalizada, excepto 3 documentos "O"-obligaciones reconocidas, correspondientes al Instituto Galego da Vivenda e Solo de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas (ver apartado 5.2) que por error se imputaron a 1990 siendo la fecha del contrato de los modificados del año 1991.

Se recomienda, en términos generales, que antes de expedir los documentos O y OK, las certificaciones de obra y minutas de honorarios sean previamente intervenidas y aprobadas por el órgano competente.

Se realizó una muestra de las ordenes de pago y de los pagos realizados con los cargos bancarios, partiendo de las propuestas de pago expedidas en el ejercicio corriente 1990.

Igualmente se verificaron los ingresos del ejercicio correspondiente al F.C.I.-90 mediante comprobación de su abono en la cuenta del Banco de España.

6.7.- Ajustes de la Liquidación Presupuestaria.-

Los ajustes que se deberían efectuar en la liquidación al 31-12-90 serían los siguientes:

PRESUPUESTO DE GASTOS — Miles de Pesetas

Aplic.presupues.	Nº Proyecto	Apartado informe	Obligaciones Reconocidas
06.50.331A	602 y 607	5.2	-200.550
06.50.331A	606	5.2	-53.606
SUMA TOTAL			-254.156

La explicación de los ajustes se recoge en el apartado 5.2. del presente informe.

7.- OPINIÓN FINAL.-

Se revisó la documentación soporte que contiene el Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios y la Liquidación Presupuestaria de los F.C.Is. al 31-12-90, habiéndose utilizado en su examen pruebas de auditoría generalmente aceptadas.

En nuestra opinión excepto por las salvedades expuestas en el apartado 5.2, y recogida en el apartado 6.7 de ajustes, el Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios y la Liquidación de 1.990 referida al concepto F.C.I. presentan adecuadamente la situación presupuestaria y financiera de los gastos de la ejecución de los proyectos y de las percepciones de las dotaciones de su Estado de Ingresos, de conformidad con los principios y criterios correspondientes a la Contabilidad Pública, Ley de Gestión Económica y Financiera de Galicia y demás normativa vigente a 31-12-1.990.

Por último señalar que en los Anexos nº I, I1, I2, I3, II, II1 y III, se muestran los estadillos elaborados por este Consello de Contas correspondientes a los Modelos Tipo del Tribunal de Cuentas.

8.- ALEGACIONES.-

8.1.- Alegaciones de la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma).-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Régimen Interior del Consello de Contas de 2 de junio de 1992 se puso en conocimiento de la Consellería de Economía y Hacienda el resultado de las actuaciones.

Se adjuntan las alegaciones recibidas en respuesta a este trámite (Ver Anexo número IV).

Se hace constar que se ha modificado el apartado 4.3.2 del anteproyecto y no se consideraron oportunas por este Consello ninguna de las otras alegaciones, cuestión que se amplía en el apartado siguiente de puntualizaciones.

8.2.- Puntualizaciones a las alegaciones formuladas por la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma).-

Primera: Apartado 3.2.- La determinación del grado de ejecución.-

Apartado A)

Este Consello considera que no es un criterio subjetivo analizar el grado de ejecución del presupuesto en base a las obligaciones reconocidas, si no por

el contrario, es un criterio generalmente aceptado por el propio Tribunal de Cuentas del Estado, por lo que se ratifica en su informe.

Apartado B)

Este Consello estima que debería haber una perfecta coordinación entre la Intervención General, la Dirección General del Tesoro y la Dirección General de Planificación y Relaciones con la C.E.E. de la Consellería de Economía y Hacienda, de tal forma que los datos facilitados por la Dirección General de Planificación y Relaciones con la C.E.E. fuesen siempre coincidentes con los de la liquidación presupuestaria, de tal forma que siempre hubiese coincidencia en los estados del F.C.I. de la contabilidad oficial con los que se derivan de la relación con el Ministerio de Economía y Hacienda.

Para ello es necesario que las distintas Consellería no introduzcan variaciones cualitativas y cuantitativas de los proyectos sin estar debidamente aprobados conjuntamente con el Comité de Inversiones Públicas.

Apartado C)

Por haberse recibido el escrito de la Intervención General con posterioridad al envio del anteproyecto de este informe, figuraba en el mismo que no se habia recibido la citada documentación. Una vez recibida se ha suprimido el citado texto.

Segunda: Apartado 4.2.3.- La no implantación de un sistema de proyectos de inversión ni la contabilidad analítica.-

Este Consello estima que debía implantarse la contabilidad financiera en la Xunta de Galicia antes del 1 de enero de 1995, con el fin de conseguir una mejor información y transparencia contable.

Respecto a la comunicación de que la implantación del subsistema de proyectos de inversión ya fue implantado con fecha 1 de noviembre de 1992, mejora sin duda el control por parte de esa Administración, no pudiendo incluir el subsistema de proyectos de inversión de este informe por razón de espacio, y considerando que este informe se refiere al ejercicio 1990.

Tercera: Apartados 4.1.- e 4.2.- El análisis del grado de ejecución.-

Este Consello, analizadas las alegaciones, se ratifica en su informe.

Cuarta: Apartado 4.2.3.5.- Resumen general del grado de ejecución del ejercicio corriente.

Este Consello, analizadas las alegaciones, se ratifica en su informe.

Quinta: Punto B) del Apartado 4.3.2.- Ingreso del F.C.I. en el Ejercicio 1990 correspondientes a ejercicios cerrados.-

La alegación no desvirtúa el contenido del informe, por lo que este Consello se ratifica en el mismo.

Sexta: Apartado 5.- Contratación Administrativa.-

Estudiadas las alegaciones, este Consello se ratifica en su informe.

Séptima: Apartado 5.2.- Contratación administrativa en la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.-

Respecto al apartado A) les significamos que las empresas contratantes no pueden expedir las certificaciones de obras hasta que este firmado el contrato y el Acta de Replanteo. Esta última indica la fecha de inicio de las obras, y siempre se formaliza con posterioridad a la firma del contrato, ya que es el propio contrato el que indica el plazo máximo para la firma del Acta de Replanteo, por lo que a pesar de haber resolución aprobatoria, no debió formalizarse el documento "O" de obligación, al estar el contrato firmado en el ejercicio 1991 (art. 41 de la Ley de Contratos del Estado y 128 de su Reglamento).

La Resolución aprobatoria solo es documento justificativo para emitir el documento "D" de disposición pero no el documento "O" de obligación.

Respecto al apartado B) les significamos que aunque se trate de servicios afectados desempeñados en régimen de monopolio, siempre es necesario la realización del correspondiente contrato de acuerdo con lo que determina el art. 4 de la Ley de Contratos del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2 de la misma.

En virtud de lo expuesto, este Consello se ratifica en su informe.

Octava: Apartado 6.5.- Contabilización de los ingresos.-

Este apartado ha sido modificado por el Consello de Contas, al tenerse en cuenta las alegaciones de la Consellería de Economía y Hacienda.

Novena: Apartado 6.6.- La formalización de documentos contables.-

Este Consello se ratifica en que antes de expedir los documentos "O" e "OK", las certificaciones de obra y minutas de honorarios sean intervenidas y aprobadas previamente por el órgano competente, con el fin de evitar errores que puedan tener las facturas de las certificaciones y minutas, y ello no implica que las Intervenciones Delegadas tengan que llevar un registro extracontable de las certificaciones fiscalizadas de conformidad y pendientes de contabilizar, sino llevar un control de las certificaciones expedidas, ya que en la muestra auditada se detectaron certificaciones sin firma.

En virtud de lo expuesto, no es desafortunada la recomendación de este Consello, sino la propia alegación.

Décima: Los ajustes y la opinión final.-

Se ratifica unicamente el apartado 6.5.-, pero la opinión final tiene que contener la observación del apartado 5.2.-, por ser completamente correcto el informe de este Consello.

A N E X O S

ANEXO I

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS CRÉDITOS AFECTADOS AL F.C.I. - 1.990

(En miles de ptas.)

	CRÉDITO	MODIFICACIONES			CRÉDITO	OBLIGAC.	PAGOS	PENDIENTE	
	INICIAL	INCORPOR.	OTROS AUM	BAJAS	DEFINITIVO	RECONOCIDAS	REALIZADOS	DE PAGO	REMANENTE
F.C.I. 1.990	19.445.800	0	1.090.963	1.090.963	19.445.800	16.287.611	12.476.668	3.810.943	3.158.189
F.C.I. 1.989	0	6.573.263	5.985	4.564	6.574.684	4.608.750	4.067.388	541.362	1.965.934
F.C.I. 1.988	0	2.396.429	8.317	8.317	2.396.429	1.562.612	1.369.352	193.260	833.817
F.C.I. años anteriores	0	1.515.764	0	0	1.515.764	655.513	535.022	120.491	860.251
TOTAL	19.445.800	10.485.456	1.105.265	1.103.844	29.932.677	23.114.486	18.448.430	4.666.056	6.818.191

ANEXO I.1

ESTADO DE RESULTAS DEL F.C.I. DE EJERCICIOS ANTERIORES

OBLIGACIONES A PAGAR

(en miles de ptas.)

F.C.I. - EJERCICIO	OBLIGAC. PENDIENTES DE PAGO A 1/1/90	AUMENTOS (BAJAS)	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31/12/90
F.C.I. - 89	5.485.257	0	5.478.969	6.288
F.C.I. - 88	3.192	0	286	2.906
RESTO F.C.I.	4.001	0	101	3.900
TOTAL GENERAL	5.492.450	0	5.479.356	13.094

ANEXO I.2

CLASIFICACIÓN POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO 1.990

(en miles de ptas.)

CONSELLERÍA	C.O.T.O.P.				AGRICULTURA	PESCA	SANIDAD	EDUCACIÓN	RESTO	TOTALES
F.C.I. - EJERCICIO	OBRAS PÚBLICAS	TRANSP. Y COMUN.	VIVIENDA	URBAN. Y MED. AMB.	AGRIC. GAN. Y MONTES	PESCA	SANIDAD	EDUCACIÓN	OTRAS OBRAS	
F.C.I. - 1.990	6.871.533	339.480	2.858.411	88.136	2.349.761	0	357.564	3.422.726	0	16.287.611
F.C.I. - 1.989	703.705	129.000	703.237	35.049	1.542.223	43.986	481.281	598.876	371.393	4.608.750
F.C.I. - 1.988	22.622	14.741	464.983	8.559	755.194	51.992	61.653	46.487	136.381	1.562.612
RESTO F.C.I.	13.026	4.697	101.365	91.546	82.870	49.452	9.830	24.210	278.517	655.513
TOTAL GENERAL	7.610.886	487.918	4.127.996	223.290	4.730.048	145.430	910.328	4.092.299	786.291	23.114.486

ANEXO I.3

CLASIFICACIÓN POR SECTORES DE EJERCICIOS ANTERIORES - PENDIENTE DE PAGO A 31-12-90

(en miles de ptas.)

CONSELLERÍA	C.O.T.O.P.				AGRICULTURA	PESCA	SANIDAD	EDUCACIÓN	RESTO	TOTALES
SECTORES	OBRAS PÚBLICAS	TRANSP. Y COMUN.	VIVIENDA	URBAN. Y MED. AMB.	AGRIC. GAN. Y MONTES	PESCA	SANIDAD	EDUCACIÓN	OTRAS OBRAS	
F.C.I. - 1.989	0	0	0	4.783	816	0	0	0	689	6.288
F.C.I. - 1.988	0	0	874	0	0	0	4	1.714	314	2.906
RESTO F.C.I.	233	0	0	500	3.167	0	0	0	0	3.900
TOTAL	233	0	874	5.283	3.983	0	4	1.714	1.003	13.094

ANEXO II

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS AFECTADOS A LOS DISTINTOS F.C.I.s

POR OPERACIONES REALIZADAS EN 1.990

(en miles de ptas.)

F.C.I. - EJERCICIO	PREVISIÓN INICIAL	REMAN.	OTROS AUM.	BAJAS	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS REALIZADOS	PTE. COBRO A 31/12/90	DIFERENCIA
F.C.I. - 1.990	19.445.800	0	0	0	19.445.800	23.671.283	10.744.965	12.926.318	4.225.483
COMPENS.TRANSITORIA	8.099.800	0	0	0	8.099.800	0	0	0	-8.099.800
TOTAL GENERAL	27.545.600	0	0	0	27.545.600	23.671.283	10.744.965	12.926.318	-3.874.317

ANEXO II.1

ESTADO DE RESULTAS DEL F.C.I. DE EJERCICIOS ANTERIORES

DERECHOS A COBRAR

(en miles de ptas.)

F.C.I. - EJERCICIO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1/1/90	AUMENTOS (BAJAS)	COBROS REALIZADOS	PENDIENTE DE COBRO A 31/12/90
F.C.I. - 89	10.077.358	-48.186	10.011.587	17.585
F.C.I. - 88	49.413	0	46.494	2.919
RESTO F.C.I.	948	0	948	0
TOTAL GENERAL	10.127.719	-48.186	10.059.029	20.504

ANEXO III

FLUJO DE COBROS Y PAGOS EN EL EJERCICIO 1.990

(en miles de pesetas.)

	COBROS				PAGOS			
F.C.I. - EJERCICIO	JUSTIFICADO AÑOS ANT. PTE. COBRO	JUSTIF. EJERCICIO	COBRADO	PENDIENTE DE COBRO A 31/12/90	PENDIENTE DE PAGO AÑOS ANT.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGADO	PENDIENTE DE PAGO
F.C.I. - 1.990	0	23.671.283	10.744.965	12.926.318	0	23.114.486	18.448.430	4.666.056
F.C.I. - 1.989	10.077.358	-48.186	10.011.587	17.585	5.485.257	0	5.478.969	6.288
F.C.I. - 1.988	49.413	0	46.494	2.919	3.192	0	286	2.906
RESTO F.C.I.	948	0	948	0	4.001	0	101	3.900
TOTAL GENERAL	10.127.719	23.623.097	20.803.994	12.946.822	5.492.450	23.114.486	23.927.786	4.679.150

ANEXO IV

ALEGACIONS O ANTEPROXECTO DE INFORME DE FISCALIZACION RELATIVO O FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (F.C.I.) CORRESPONDENTE O EXERCICIO DE 1990

ESCRITO DE ALEGACIONS O ANTEPROXECTO DE INFORME DE FISCALIZACION RELATIVO O FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL CORRESPONDENTE O EXERCICIO 1990

PRIMEIRA: O APARTADO 3.2. "DETERMINACION DO GRAO DE EXECUCION

OBSERVACIONS:

A) Sinálase no apartado 3.2. do anteproxecto de informe o seguinte:

> *"Neste informe móstrase a cuantificación que consideramos máis significativa dos créditos, nas súas fases de obrigas recoñecidas e pagos ordenados, por proxectos financiados coas dotacións do F.C.I., ó 31 de decembro de 1990, de conformidade co Artigo 54.3 e 54.4., da Lei 3/1984, de 3 de abril, de Xestión Económica e Financeira Pública de Galicia ...".*

B) Así mesmo, máis adiante indícase:

> *"Asemade, inclúense igualmente os "importes solicitados" pola Xunta de Galicia á Administración Central como consecuencia dos pagos realizados por ésta con motivo da execución das obras, subministracións, para que esta última os reembolse nos termos fixados no Artigo 10.2, da Lei 7/1984 do F.C.I. ...".*

C) A continuación sinálase:

> *"Como se pon de manifesto no apartado 4.3.1., este Consello solicitou por escrito á Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia a relación de importes solicitados á Administración Central, non tendo resposta da citada Consellería."*

ALEGACIONS:

O APARTADO A).-

Procede neste suposto, formular idéntica alegación á efectuada ó anteproxecto de informe do FEDER remitidas a ese Consello de Contas con data de 20 de novembro, e que, en esencia consiste en:

O recoñecemento da obriga é a operación pola que se contraen en contas os créditos esixibles derivados da realización efectiva dunha contraprestación.

Parece moi subxectivo analiza-lo grao de execución do presuposto en base únicamente ás obrigas recoñecidas no exercicio; máxime cando se trata de gastos de capital, como é o caso que nos ocupa, sen ter en conta outras consideracións.

Nun sistema de execución presupostaria ideal, ó finaliza-lo exercicio, as obrigas igualaríanse ás disposicións. Parece lóxico, que para os gastos correntes, normalmente periódicos, a execución final se aproxime á ideal.

Non obstante, dende o momento en que tanto a lei xeral presupostaria, como a lei 11/1992 de 7 de outubro de réxime financeiro e presupostario de Galicia contemplan a posibilidade de que existan incorporacións de créditos, considerando esta figura como unha modificación presupostaria é obvio que se prevé a existencia ó final do exercicio de remanentes de crédito comprometidos, os cales deben obedecer, salvo outro tipo de incidencias, ás prestacións realizadas no último mes do exercicio, que por imponderables atribuíbles ó peche do mesmo a unha data, non é posible contraé-las súas correspondentes obrigas en contas.

Outro motivo que pode incidir directamente na fase de execución de obrigas recoñecidas, serían os retrasos e demoras na entrega da contraprestación, que sole coincidir naqueles tipos de gastos que son máis complexos na súa realización e que, teñen polo tanto, unha alta cuantificación económica.

Polo que respecta os retrasos da execución, cabe subliñar, que a normativa legal que regula os contratos contén determinadas prerrogativas da Administración aplicables os casos, pero, en calquera caso, a adopción das mesmas debe condicionarse ó posible resultado negativo da súa adopción.

Polo tanto, califica-lo grao de execución presupostaria de forma porcentual en base as obrigas recoñecidas no exercicio, consideramos que non representa a realidade da execución, se non se teñen en conta además os motivos que o orixinan.

Por tódo-lo anteriormente exposto, e tendo en consideración que a responsabilidade dos órganos xestores radica na execución do seu presuposto como consecuencia da realización das acción que contén o mesmo; e que esta execución, debe dividirse en dúas partes perfectamente diferenciadas; unha, a que corresponde á cumprimentación de tódo-los trámites administrativos conducentes ó inicio da execución por parte do adxudicatario da contraprestación e, outra, á realización efectiva da contraprestación; e, sendo únicamente a primeira responsabilidade directa do órgano xestor, non parece lóxico califica-lo grao de cumprimento da segunda como responsabilidade da Administración.

O APARTADO B).-

Prodúcese con certa frecuencia o feito ó que xa se facía referencia no noso escrito remitido a ese Consello de Contas en data 7 de outubro de 1992 (nº R.S. 1.604), relativo a que unha certificación pode ser fiscalizada e pagada na Comunidade Autónoma coa soa esixencia de que exista crédito na aplicación presupostaria e nembargantes esta certificación pode non ser cobrada no Ministerio de Economía, si o crédito que obra en dito Ministerio é inferior ó certificado ata unha data determinada polo Organo Xestor, pois o seguimento que practica a Dirección Xeral de Coordinación coas Facendas Territoriais do Ministerio de Economía para a remisión dos pagos é por proxectos.

Estes desaxustes poden darse nun momento determinado (peche do exercicio), non coincidindo os estados do FCI da contabilidade oficial e os que se deriven da relación co citado Ministerio.

O APARTADO C).-

A solicitude á que se refire este parágrafo cursóuse por ese Consello con data 23 de setembro (nº R.S. 891); sendo remitida contestación por esta Intervención Xeral da Comunidade Autónoma con data 23 de outubro pasado (nº R.S. 1.749).

Como queira que o Proxecto de Informe elaboróuse con data 22 de outubro, efectivamente, á data de emisión do mesmo non puido ser recibido o citado escrito.

Na súa consecuencia, estimamos oportuna a supresión do citado parágrafo no informe definitivo.

SEGUNDA: A NON IMPLANTACION DUN SISTEMA DE PROXECTOS DE INVESTIMENTO NIN A CONTABILIDAE ANALITICA.

OBSERVACIONS:

Especifícase no apartado 4.2.3. (páx. 37), o seguinte:

"A Comunidade Autónoma non ten implantado o subsistema de proxectos de investimento de Contabilidade pública, non tendo control analítico ...".

ALEGACIONS:

Procede así mesmo, neste suposto, formular idéntica alegación á efectuada ó anteproxecto de informe do FEDER, no que facíase constar que:

Estando conforme esta Administración coa recomendación que se formula en orde á implantación da contabilidade financeira, é preciso indicar que o seu obxectivo fundamental consiste en conquerir que a información económica e financeira ofrecida sexa homoxénea, analizable e integrable coa ofrecida pola Administración do Estado e as restantes Administracións Autonómicas.

Neste senso, é importante destacar que por acordo do "Consejo de Política Fiscal y Financiera" de 29 de novembro de 1991, constituíuse un grupo de traballo integrado por tóda-las Intervencións Xerais das distintas administracións. O mencionado grupo de traballo, no ámbito da normalización contable da información económico-financeira, adoptóu un acordo para a súa futura normalización total, acadándose o compromiso de implantar o sistema de contabilidade financeira a partir do 1 de xaneiro de 1995.

Polo que respecta a implantación do subsistema de proxectos de investimento é necesario indicar que con data 1 de novembro de 1992, foi implantado nesta Administración polo que, con este Escrito de Alegacións, adxunto se acompaña o dossier que contén as instruccións para a súa entrada en funcionamento.

Estimamos por tanto convinte a súa inclusión no informe definitivo co obxecto do seu coñecemento por parte dos destinatarios do mesmo.

TERCEIRA: O ANALISE DO GRAO DE EXECUCION.

OBSERVACIONS:

No apartado 4.1 do anteproxecto de informe, faise unha análise da execución dos proxectos de investimento financiados con F.C.I. dotados en exercicios anteriores; cos seus correspondentes resumes e gráficos.

De forma similar, no apartado 4.2 realízase unha análise de execución realizada no exercicio de 1990 dos proxectos de investimento financiados con F.C.I de 1990; con gráficos e cadros resume por seccións presupostarias.

Así mesmo, e como resultado do estudio realizado nos apartados anteriores dedúcense as conclusións sobre a execución que se conteñen no apartao 4.2.3.7..

ALEGACIONS:

Os graos de execución presupostaria que se analizan no anteproxecto do informe dese Departamento, establécense únicamente como o resultado dunha simple operación aritmética, sen que se poña de manifesto no mesmo os motivos que os orixinan. Polo que da súa lectura pódense derivar conclusións erróneas ó facer depender exclusivamente de ese parámetro a calificación da xestión realizada.

O anteriormente exposto reflexa un grao de execución considerado como boa execución presupostaria, conforme se indica no apartado 4.2.3.7. de "Conclusións". Na súa virtude esta Administración Autonómica considera acertada a calificación global do grao de execución, pero non así a determinación das porcentaxes, tanto globalmente como individualizadamente por seccións.

CUARTA: O APARTADO 4.2.3.5. "RESUME XERAL DO GRAO DE EXECUCION DO EXERCICIO CORRENTE".

OBSERVACIONS:

Na páxina 63 do anteproxecto de informe, afírmase:

"As cantidades pendentes de pago a 31-XII-90 alcanzan o 20,18% sobre obrigas recoñecidas o que se debe fundamentalmente a que as Consellerías emiten documentos "O" e "OK" en maior número no mes de decembro que en calquera outro mes do exercicio, e ademáis ..."

ALEGACIONS:

Como se indicaba no Escrito de Alegacións ó Anteproxecto de Informe do FEDER; o final do exercicio, e como consecuencia das operacións de peche, os documentos en fase "K" (proposta de pago), tiveron como data límite de entrada o 17 de decembro; nembargantes os documentos "A", "D" e "O" tiveron como data límite de entrada nas oficinas contables o 28 de decembro.

Obviamente, deberá existir, como mínimo un saldo de obrigas positivo, por todas aquelas que se tramitaron no intervalo comprendido entre as mencionadas datas. Polo tanto o cálculo sobre ditos parámetros non pode servir de base para califica-la xestión das oficinas xestoras.

Se a todo elo engadimos que entre a fase "O" e a fase "P" existen tres fases presupostarias máis, a saber. proposta de pago (K), ordenación e sinalamentos (provisional e definitivo), chegaremos á conclusión de que o único parámetro válido, será analiza-los pagos realizados en función das propostas recibidas no tesouro.

Cabe destacar así mesmo, que o proceso que debe seguirse entre a ordenación e o pago material, por servidumes informáticas, está situado nun mínimo de tres días. Lóxicamente, ó producirse o corte para o análise nun día concreto (31-XII) deberá existir un saldo positivo na ordenación pendente de pago.

QUINTA: O PUNTO B) DO APARTADO 4.3.2. "INGRESOS DO F.C.I. NO EXERCICIO 1990 CORRESPONDENTES A EXERCICIOS PECHADOS".

OBSERVACIONS:

Na páxina 72 do anteproxecto de informe expónse:

"Os dereitos pendentes de cobro de anos anteriores a 1989, na liquidación de Exercicios Pechados, non están desglosados na liquidación de 1990, obténdoos este Consello por diferencia co Maior de Ingresos."

ALEGACIONS:

O novo Sistema de Información Contable da Xunta de Galicia (XUMCO), contemplado na orde de 1 de decembro de 1989, pónse en funcionamento o 2 de xullo de 1990, coincidindo coa entrada en vigor do presuposto aprobado para ese exercicio.

Non foi posible na Conta Xeral de 1990, por razóns obvias de índole temporal, presentar as agrupacións correspondentes á liquidación de ingresos de presuposto corrente e de exercicios pechados os listados que se obteñen a través do devandito sistema informático; o cal non quere dicir, que non se poidera obter dita información.

Polo exposto a agrupación de exercicios pechados correspondente á liquidación de 1990, recollíase na Conta Xeral dese exercicio coa estructura que se prevé nos artigos 35.3. a 35.6. da orde de 27 de decembro de 1986, pola que se dictan as normas provisionais sobre a contabilidade, que desenvolverán as oficinas contables nas Delegacións de Facenda da Xunta de Galicia.

Non obstante, a Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia remitida a ese Consello con data 18 de novembro de 1992, recolle na agrupación correspondente a liquidación de ingresos de exercicios pechados a estructura contemplada no artigo 51 da orde de 1 de decembro de 1989.

SEXTA: O APARTADO 5. "CONTRATACION ADMINISTRATIVA".

OBSERVACIONS:

Na páxina 77 correspondente o apartado máis arriba mencionado fánse as seguintes observacións:

> *"... o sistema de contratación máis empregado foi o de Concurso e ainda que a Lei 4/1990 do 29 de xuño, dos Presupostos Xerais Do Estado para 1990, no seu Artigo 14, ...".*

E máis adiante sinala:

> *"... deberáse procura-lo uso do Sistema de Subhasta, xa que sen incorrer en baixas temerarias, obtéñense condicións económicas máis ventaxosas."*

ALEGACIONS:

Procede neste apartado, formular idéntica alegación á efectuada ó anteproxecto de informe do FEDER, relativa asimesmo a Contratación Administrativa remitida a ese Consello de Contas con data de 20 de novembro, na que substancialmente expónse:

Esta Administración discrepa da opinión contida no informe, en canto se sinala que ó utilizar o sistema de subhasta, obtéñense condicións económicas máis vantaxosas.

Entende esta Administración que as condicións económicas favorables non veñen determinadas tanto polo sistema de adxudicación utilizada na contratación administrativa, senón pola celeridade na realización do proceso de pagamentos.

No procedemento de subhasta adxudicaráse á proposición economicamente máis vantaxosa. No procedemento de concurso adxudicaráse á proposición máis vantaxosa sen atender exclusivamente ó valor económico da mesma.

Pero, si tódo-lo anteriormente exposto son principios que inspiran o procedemento que debe seguirse para a adxudicación; polo que respecta á contratación, a lexislación de contratos do Estado determina de maneira indubitable os requisitos necesarios para a adopción de cada un dos sistemas.

Este apartado 5. do informe refírese a contratación administrativa, polo que, si os expedientes revisados cumplen os requisitos que lle sexan esixibles, entende esta Administración que debería excluírse o citado comentario, e máis aínda cando se representa de forma porcentual e comparativa.

SEPTIMA: O APARTADO 5.2. "CONTRATACION ADMINISTRATIVA NA CONSELLERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E OBRAS PUBLICAS".

A) OBSERVACIONS:

Sinálase na páxina 81 do anteproxecto de informe o seguinte:

> *"Co ánimo de executa-lo presuposto do exercicio corrente, imputáronse e contabilizáronse indebidamente documentos "O" de Obrigas Recoñecidas nas datas finais do exercicio 1990, de reformados formalizados en 1991, podendo considerarse un erro de datas ó ter que expedirse as certificacións de obras con posterioridade á sinatura do contrato, e emitirse os documentos "O" con data 28 de decembro de 1990, ..."*

ALEGACIONS:

Consideramos non afortunada a redacción do parágrafo no que se comenta que có ánimo de executa-lo presuposto do exercicio corrente imputáronse e contabilizáronse indebidamente documentos "O" de reformados formalizados en 1991, xa que, se desprende do mesmo, un xuício de intencións que contén como obxectivo básico dos órganos de xestión a execución do presuposto na súa fase de obrigas recoñecidas facéndose caso omiso doutras circunstancias (legalidade, oportunidade, eficacia...) e; como xa se expuxo neste Escrito de Alegacións, a fase presupostaria de recoñecemento de obrigas supón a realización por parte do terceiro da prestación do servicio (que plasmaríase neste caso na expedición da correspondente certificación de obra).

Non obstante, a noso xuício, considérase oportuno sinalar que, para o caso concreto relativo ó expediente LU/88/020 que se describe neste apartado, padecéuse un erro ó contabilizar a obriga non existindo o contrato asinado, a pesar de existir a resolución de aprobación do mesmo, xa que, ó ser éste de data posterior (28-XII-1990), á correspondente certificación (14-XII-1990) debería someterse á convalidación polo Consello da Xunta de Galicia.

B) OBSERVACIONS:

Na páxina 82, dentro do mesmo apartado 5.2. do anteproxecto de informe, faise a seguinte observación:

> *"Asemade, nos expedientes M/PO/87.3 e M/OUR/85.4.1. non se celebraron contratos con Telefónica e Fenosa no primeiro deles e con Fenosa no segundo, contestando a Conselleria que por tratarse de servicios afectados non se celebran os mesmos e que o peoxecto técnico redactado polas compañías afectadas é aprobado pola Dirección Xeral de Obras Públicas, servindo de base para o pago de certificacións. Recoméndase que se celebren os correspondentes contratos administrtivos e que no sucesivo se absteñan de expedir documentos ADOK sen o correspondente contrato."*

ALEGACIONS:

Se ben é certo o sustrato do contido no citado parágrafo; e dicir, a non celebración dos contratos de referencia; entende esta Administración que non se incumple a normativa legal vixente xa que, o tratarse de servicios afectados desempeñados en réxime de monopolio, non sería necesario a celebración dun contrato previo para a realización dos mesmos nin a expedición das correspondentes certificacións xa que, simplemente coa facturación do servicio realizado en concepto de indemnización, sería suficiente xustificación ante a Administración ó tratarse de obrigas que xurden como consecuencia da celebración dun contrato (a realización da obra correspondente), non constituíndo por elas mesmas o fin do contrato. Non obstante, e só como garantía do cumprimento e xustificación dos traballos realizados, expídense as correspondentes certificacións en función dos proxectos técnicos redactados polas compañías afectadas e aprobados pola Dirección Xeral de Obras Públicas.

Polo exposto, esta Administración solicita dese Consello, a supresión do mencionado parágrafo no Informe definitivo.

OCTAVA: O APARTADO 6.5. "CONTABILIZACIONS DOS INGRESOS".

OBSERVACIONS:

Indícase no apartado 6.5. (páx. 90), o seguinte:

"Asemade tense detectado que se contabilizaron como dereitos recoñecidos en contraído simultáneo, diversas partidas que teóricamente correspondían a exercicios pechados, ...".

"Os citados dereitos por un importe total de 109.576 miles de pesetas, debían estar contabilizados como contraído previo en dereitos recoñecidos pendentes de cobro de exercicios pechados".

Máis adiante indícase:

"E convinte que por parte da Comunidade se estableza o dereito recoñecido na Contabilidade Presupostaria como contraído previo, no momento de producirse a petición de fondos á Administración Central".

ALEGACIONS:

Fundaméntase no informe que os citados dereitos debían estar recoñecidos en exercicios pechados, en base a que corresponden á programacion do F.C.I. de exercicios anteriores a 1990.

Nembargantes, recoméndase que se contabilice no momento de producirse a correspondente petición de fondos á Administración Central.

A petición de fondos realízase, con carácter xeral, en base á certificación que a Intervención Xeral remite mensualmente á Dirección Xeral de Planificación da Consellería de Economía e Facenda, por todos aqueles gastos das aplicacións presupostarias do F.C.I. que acadaron a fase de obrigas recoñecidas.

O déficit ou superávit presupostario non financeiro de exercicio corrente, establécese como diferencia entre dereitos recoñecidos e obrigas recoñecidas.

Na súa consecuencia, esta Administración recoñece o dereito cando se produce a petición de fondos, con independencia do ano a que corresponda a programación do F.C.I.. Non facelo así, significaría altera-lo resultado do exercicio corrente.

Nas observacións citadas, existe unha contradicción por canto se indica que deberían recoñecerse dereitos de exercicios pechados e, máis adiante, dícese que os dereitos deben contraerse no momento de producirse a petición de fondos. Entendemos que a solución correcta é esta última, que por outra parte, estando xa establecida nesta Administración, consideramos non procedente a súa inclusión como recomendación no proxecto de informe.

Así, con respecto os ingresos de referencia, relacionados na páxina 90 do anteproxecto de informe e dos que as súas fotocopias se xuntan a este Escrito de Alegacións é necesario precisar:

1) Que no exercicio de 1990 non se recoñeceron nin se podían recoñecer os dereitos pendentes de cobro polos importes correspondentes a ditos ingresos.

2) Que a Administración Central, como consta nas fotocopias que se adxuntan, expide os ADOK correspondentes durante o exercicio de 1990.

3) Que as datas de ingreso na Comunidade Autónoma corresponden ó exercicio de 1990.

Polo tanto, considera esta Administración que non poden ser contabilizados como de exercicios cerrados en dereitos pendentes de cobro de exercicios anteriores, ó non ser recoñecidos tales dereitos no exercicio de 1989 ou anteriores, sendo correctamente aplicados ó exercicio corrente 1990 os dereitos recoñecidos e os ingresos realizados.

Así mesmo recoméndase neste mesmo apartado a utilización da orde 23 de decembro de 1986 pola que se aproba a Instrucción de Contabilidade da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira (B.O.E. nº 11 do martes 13 de xaneiro de 1987), citándose en concreto diversas regras da mesma.

A este respecto cabe significar, que, a mencionada Instrucción non é de aplicación nesta Administración, por canto que as normas que regulan estas operacións, orde de 26 de decembro de 1986, pola que se aproba a instrucción provisoria de contabilidade do gasto público da Comunidade Autónoma de Galicia, e orde de 1 de decembro de 1989 pola que se implanta un novo sistema de información contable na Administración da Xunta de Galicia; atópanse aprobadas e vixentes nesta Comunidade Autónoma.

NOVENA: O APARTADO 6.6. "A FORMALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES".

OBSERVACIONS:

Na páxina 92, do anteproxecto de informe, sínalase:

"Recoméndase, en termos xerais, que antes de expedi-los documentos "O" e "OK", as certificacións de obra e minutas de honorarios sexan previamente intervenidas e aprobadas polo órgano competente".

ALEGACIONS:

As certificacións de obra, unha vez recibidas son conformadas e/ou aprobadas polo órgano xestor competente, quen as remite a súa intervención delegada, co obxecto de sometelas ó necesario trámite fiscal e que por economía procesal as acompaña dos correspondentes documentos contables, non tendo estes ningún valor legal, en tanto non se atopen dilixenciadas nos mesmos a data de contabilización e o número de asiento.

Non facelo desta maneira, implicaría que as intervencións delegadas terían que levar un rexistro extracontable que controlase todas aquelas certificacións fiscalizadas de conformidade e pendentes de contabilizar, motivo polo que consideramos desafortunada a recomendación proposta.

DECIMA: OS AXUSTES E A OPINION FINAL.

ALEGACIONS:

Sendo estes apartados 6.7. (Axustes da Liquidación Presupostaria), e 7. (Opinión Final), consecuencia das observacións formuladas nos apartados 5.2. e 6.5 do anteproxecto de informe; e tendo sido os mesmos obxecto de alegacións neste escrito, consideramos innecesario reproducilas; polo que de seren estimadas as mesmas, a opinión final deberá ser favorable sen salvidades.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 1992

O INTERVENTOR XERAL
DA COMUNIDADE AUTONOMA

Asdo.: JUAN JOSE NOVOA MONTERO

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

1.- INTRODUCCIÓN: FONDOS ESTRUCTURALES.-

El tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea prevé en el artículo 130.a) que la Comunidad desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social, y que se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas.

En el artículo 130.c) se prevé que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en lo sucesivo FEDER) estará destinado a corregir los principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad, mediante una participación en el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, y en la reconversión de las regiones industriales en decadencia.

Este artículo 130.c) ha sido modificado en el Tratado de la Unión Europea aprobado en Maastricht, el 7 de Febrero de 1.992 en el que se establece que: "El Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive."

Asimismo, el artículo 130.d) del Tratado prevé una propuesta global encaminada a introducir en la estructura y en las normas de funcionamiento del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección "Orientación" (FEOGA-Orientación), del Fondo Social Europeo (FSE) y del FEDER las modificaciones que fuesen necesarias para precisar y racionalizar sus funciones, con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en los artículos 130.a) y 130.c) del Tratado, así como a mejorar su eficacia, y a coordinar entre sí sus intervenciones y éstas con las de los instrumentos financieros existentes.

Y el artículo 130.e), modificado en Maastricht establece que: "Las decisiones de aplicación relativas al FEDER serán tomadas por el Consejo por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189.c) y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

En cuanto al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección "Orientación" (FEOGA-Orientación) y el Fondo Social Europeo (FSE), seguirán siendo aplicables, respectivamente, las disposiciones de los artículos 43 y 145".

El Reglamento de la CEE nº 2.052/88 del Consejo del 24 de junio de 1.988 (D.O.C.E. nº L 185/9 del 15-7-88) relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre si de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y con las de los demás instrumentos financieros existentes, considera que de los tres Fondos Estructurales, es el FEDER el principal instrumento para la consecución del objetivo del desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, y que desempeña un papel fundamental en la reconversión de las regiones gravemente afectadas por el declive industrial.

En el artículo 1 del citado Reglamento, se establece que:

"La actuación de la Comunidad a través de los Fondos Estructurales, del B.E.I. y de los otros instrumentos financieros existentes, tendrá como finalidad hacer posible la realización de los objetivos generales enunciados en los artículos 130.a) y 130.c) del Tratado, contribuyendo al logro de cinco objetivos prioritarios:

1º) Fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas (en lo sucesivo objetivo nº 1).

2º) Reconvertir las regiones, regiones fronterizas o partes de regiones (incluyendo las cuencas de empleo y los núcleos urbanos) gravemente afectados por el declive industrial (en lo sucesivo objetivo nº2).

3º) Combatir el paro de larga duración (en lo sucesivo objetivo nº3).

4º) Facilitar la inserción profesional de los jóvenes (en lo sucesivo objetivo nº4).

5º) En la perspectiva de la reforma de la Política Agraria Común:

a) Acelerar la adaptación de las estructuras agrarias.

b) Fomentar el desarrollo de las zonas rurales.

(En lo sucesivo, objetivos nº 5.a) y 5.b))"

En el artículo 2 se establecen los medios, mediante los cuales, los Fondos Estructurales (FEOGA-Orientación, FSE, FEDER) contribuirán al logro de los objetivos nº 1 al 5.

Objetivos	Fondos Estructurales
nº1	FEDER, FSE, FEOGA-Orientación
nº2	FEDER, FSE.
nº3	FSE
nº4	FSE
nº5.a)	FEOGA-Orientación
nº5.b)	FEOGA-Orientación,FSE,FEDER

En el artículo 3 se establecen las funciones de los Fondos Estructurales, destacando que el FEDER tendrá como función esencial el Apoyo a los objetivos nº 1 y 2 en las regiones correspondientes y participará en el objetivo nº5.b), contribuyendo a apoyar las inversiones productivas, la creación o modernización de infraestructuras que contribuyan al desarrollo o a la reconversión de las regiones correspondientes y las actividades que tengan por objeto el desarrollo del potencial endógeno de las regiones correspondientes.

El FEDER contribuirá, además, a apoyar estudios o experiencias piloto relativas al desarrollo regional a nivel comunitario, en especial cuando se traten de las regiones fronterizas de los Estados Miembros.

En el artículo 4 se establece que la actuación comunitaria se considera un complemento de las acciones nacionales correspondientes o una contribución a las mismas, estableciéndose una cooperación en la preparación, financiación, seguimiento y evaluación de las acciones entre la Comisión, el Estado Miembro y las autoridades competentes señaladas por el mismo a nivel Nacional, Regional, Local o de otro tipo, persiguiendo todas las partes el logro de un objetivo común.

En el artículo 5, apartado 2 se establecen las formas de intervención financiera de los Fondos Estructurales, que serán:

a) Cofinanciación de programas operativos.

b) Cofinanciación de un régimen de ayudas nacionales, incluidos los reembolsos.

c) Concesión de subvenciones globales, en general gestionadas por un organismo intermediario designado por el Estado Miembro de acuerdo con la

Comisión, el cual efectúa el reparto de subvenciones individuales concedidas a los beneficiarios finales.

d) Cofinanciación de proyectos apropiados, incluidos los reembolsos.

e) Apoyo a la asistencia técnica y a los estudios preparatorios para la elaboración de las acciones.

Los artículos 6 y 7 se refieren al seguimiento, evaluación, compatibilidad y control de los Fondos Estructurales.

En el artículo 8 se establece que las regiones afectadas por el objetivo nº1 serán regiones NUTS (Unidades Territoriales Estadísticas) de nivel II, cuyo P.I.B. por habitante sea, sobre la base de los tres últimos años, inferior al 75% de la media comunitaria, entre las que se encuentra Galicia, cuya validez es de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, y los Estados Miembros presentarán a la Comisión sus planes de desarrollo regional y las acciones correspondientes.

La Comisión, de común acuerdo con el Estado Miembro establecerá el Marco Comunitario de Apoyo (M.C.A.) para las intervenciones estructurales Comunitarias, y para la aplicación de los objetivos nºs 1 y 2 estará asistida por el Comité Consultivo compuesto por representantes de los Estados Miembros.

El Marco Comunitario de Apoyo incluirá, en particular:

- las líneas de actuación prioritarias seleccionadas para la intervención comunitaria.
- las formas de intervención.
- el plan indicativo de la financiación, con indicación del importe de las intervenciones y sus fuentes.
- la duración de las intervenciones.

Las intervenciones efectuadas en el Marco Comunitario de Apoyo del objetivo nº1 se realizarán, preferentemente, en forma de programas operativos.

El artículo 12 regula los recursos de los Fondos Estructurales y la concentración, estableciéndose en el apartado 2º que los créditos de compromiso para los Fondos Estructurales se duplicarán en términos reales en el año 1.993 en comparación con el año 1.987. En el apartado 5 se establece que el FEDER podrá dedicar al objetivo nº1, aproximadamente el 80% de sus créditos.

El artículo 13 regula la modulación de los porcentajes de intervención, estableciéndose en el apartado 3º que los porcentajes de participación comunitaria con cargo a los Fondos Estructurales para los distintos objetivos enunciados en el artículo 1 estarán sometidos a los siguientes límites:

- Un máximo del 75% del coste total, y como norma general, un mínimo del 50% de Gasto Público, para las medidas aplicadas en regiones que pueden beneficiarse de una intervención realizada en virtud del objetivo nº 1.

- Un máximo del 50% del coste total, y como norma general, un mínimo del 25% de Gasto Público para las medidas aplicadas a las demás regiones.

El Reglamento de la CEE nº 4.253/88 del Consejo del 19-12-1.988 (D.O.C.E. nº L374/1 del 31-12-88), por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2.052/88 en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, dedica el título I a la Coordinación, el título II a los Planes, el título III a los Marcos Comunitarios de Apoyo, el título IV a las ayudas de los Fondos, el título V a la modulación de la contribución comunitaria, el título VI a las disposiciones financieras, el título VII al seguimiento y evaluación, el título VIII a los Comités, el título IX a los informes y publicidad y el título X a las disposiciones finales.

En su artículo 1 establece: "En aplicación de las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, la Comisión se encargará, respetando el parecer de sus interlocutores, de la coordinación entre las intervenciones de los distintos Fondos, por una parte, y por otra, entre dichas intervenciones y las del BEI y de los demás instrumentos financieros existentes".

En el artículo 2 establece: "La coordinación entre las intervenciones de los distintos fondos se efectuará, en particular a nivel de:

- Los Marcos Comunitarios de Apoyo (M.C.A.).
- La programación presupuestaria plurianual.
- La ejecución de programas operativos integrados, cuando se considere oportuno.

- El seguimiento y la evaluación de las intervenciones de los Fondos realizadas en virtud de un solo objetivo y de las realizadas en virtud de varios objetivos en un mismo territorio.

El título II relativo a los planes establece en su artículo 5 el ámbito de aplicación y contenido:

"1. Con arreglo a las orientaciones enunciadas en el presente artículo, los planes presentados en el marco de los objetivos nº1 al 4 y 5-b) se establecerán al nivel geográfico que se considere más adecuado. Dichos planes serán elaborados por las autoridades competentes designadas por el Estado Miembro a nivel nacional, regional u otro y serán presentados por el Estado Miembro a la Comisión.

Los planes presentados en el marco del objetivo nº 1 deberán abarcar, por regla general, una región de nivel NUTS II. No obstante, en aplicación de las disposiciones del párrafo segundo del apartado cuatro del artículo 8 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, los Estados Miembros podrán presentar un plan para varias de las regiones de los mismos incluidas en la lista a la que se refiere el apartado dos del citado artículo, con la condición de que dicho plan incluya los elementos a los que se refiere el párrafo primero del apartado cuatro.

Los planes presentados en virtud de los objetivos nº 2 y 5 b) cubrirán, en general, una o varias zonas de nivel NUTS III.

Los Estados Miembros podrán presentar planes que abarquen un territorio más extenso que el de las regiones o zonas elegibles, siempre que establezcan una diferencia entre las acciones realizadas en tales regiones o zonas y las realizadas fuera de ellas.

2. En las regiones afectadas por el objetivo nº 1, los planes de desarrollo regional incluirán cualquier medida de reconversión de zonas industriales en decadencia y de desarrollo de zonas rurales, así como cualquier acción en materia de empleo y de formación profesional, excepto aquellas cubiertas por los planes en virtud de los objetivos nº 3 y 4.

Los planes de reconversión regional y social presentados en virtud del objetivo nº 2, y los planes de desarrollo rural presentados en virtud del objetivo nº 5 b) incluirán también cualquier acción en materia de empleo y de formación profesional, excepto aquellas cubiertas por los planes correspondientes a los objetivos nº 3 y 4.

Los planes relativos a los objetivos nºs 3 y 4 establecerán una distinción entre los gastos relativos a las regiones cubiertas por los objetivos nºs 1, 2 y 5 b) y los relativos a las demás regiones.

En los planes relativos a los objetivos nºs 1 y 5 b) se indicará, en su caso, datos relativos a las acciones que se lleven a cabo con arreglo al objetivo nº 5 a).

Los Estados Miembros indicarán en los planes los elementos propios de cada uno de los Fondos, incluido el volumen de la ayuda solicitada.

De conformidad con los artículos 8, 9, 10 y 11 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, podrán añadir a sus planes solicitudes de ayudas para los programas operativos, a fin de acelerar el examen de las solicitudes y la ejecución de las intervenciones.

3. Al elaborar los planes, los Estados Miembros procurarán por que exista coherencia entre los planes centrados en un mismo objetivo en el interior de un Estado Miembro y los planes que cubran una misma zona geográfica en virtud de varios objetivos.

4. Los Estados Miembros procurarán que los planes tengan en cuenta las políticas comunitarias."

El artículo 6 establece: "Cada uno de los planes abarcará un período de duración comprendido entre tres y cinco años. Los planes podrán ser revisados por regla general sobre una base anual y en el caso de cambios importantes de la situación socioeconómica y del mercado de empleo".

En relación a los Marcos Comunitarios de Apoyo (título tres del citado Reglamento), el artículo 8 establece:

"1. Los Marcos Comunitarios de Apoyo correspondientes a los objetivos nº 1 a 4 y 5 b) se establecerán al nivel geográfico pertinente de acuerdo con el Estado Miembro en cuestión, en el marco de la cooperación y por decisión de la Comisión, de conformidad con los procedimientos establecidos en el título VIII. El BEI también estará asociado a la elaboración de los Marcos Comunitarios de Apoyo.

2. Los Marcos Comunitarios de Apoyo podrán abarcar un período de tres a cinco años.

3.[1] Los Marcos Comunitarios de Apoyo incluirán:

- Ejes prioritarios de la acción conjunta de la Comunidad y del Estado Miembro correspondiente en relación con los objetivos enunciados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, así como elementos relativos a su coherencia con las políticas económicas y sociales del Estado Miembro.

- Un esquema de las formas de intervención que vayan a utilizarse, incluyendo en especial, para los programas operativos, los objetivos específicos y los principales tipos de medidas previstas.

- Un plan indicativo de financiación en el que se precise la cuantía de las dotaciones financieras globales previstas para las diversas formas de intervención, así como la duración, incluidas las de los Fondos, las del BEI y las de los demás instrumentos financieros existentes previstos en el apartado 1 del artículo 3, cuando contribuyan directamente al plan de financiación de que se trate.

- Si procede, indicaciones sobre el suministro de medios para estudios o asistencia técnica necesarias para preparar, ejecutar o adaptar las acciones correspondientes".

El artículo 9 establece: " Al elaborar y poner en funcionamiento los Marcos Comunitarios de Apoyo, la Comisión y los Estados Miembros procurarán que el incremento de los créditos de los Fondos, previsto en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, tenga un impacto económico real en las regiones afectadas y resulte en un aumento al menos equivalente del total de las intervenciones públicas o asimilables (comunitarias y nacionales) con finalidad estructural en el Estado Miembro en cuestión, teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas en las que se efectúen dichas financiaciones".

El artículo 10 establece:

"1. Salvo acuerdo en contrario con el Estado Miembro, la Comisión adoptará una Decisión aprobando un M.C.A. a más tardar 6 meses después de haber recibido el plan o los planes correspondientes.

2. La Decisión de la Comisión relativa al Marco Comunitario de Apoyo se comunicará en forma de Declaración de Intenciones al Estado Miembro. Dicha Declaración se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas".

El artículo 12 establece: "Las intervenciones cubiertas por un Marco Comunitario de Apoyo se realizarán, principalmente, en forma de Programas Operativos que podrán aplicarse a través de un enfoque integrado en caso de que concurran las condiciones establecidas en el artículo 13".

El artículo 13.1 dice que: "A iniciativa de un Estado o de la Comisión, de acuerdo con el Estado Miembro afectado, un programa operativo podrá ejecutarse a través de un enfoque integrado:

a) Si la financiación corre a cargo de varios Fondos o, como mínimo, de un Fondo y un instrumento financiero que no sea un instrumento de préstamo.

b) Si las medidas que deben ser financiadas por varios Fondos o instrumentos financieros se complementan mutuamente y la estrecha coordinación de todas las partes interesadas puede aportar ventajas importantes.

c) Si se han previsto a escala nacional, regional y local las estructuras administrativas adecuadas para garantizar la ejecución integrada del programa."

El artículo 16.4 establece que: "Para las regiones afectadas por el objetivo nº1 el coste total de un programa operativo en el que participe el FEDER, deberá, por regla general, alcanzar los 100 millones de ECUS, entendiéndose que el coste anual medio del programa no podrá ser inferior a los 15 millones de ECUS."

1.1.- Marco legal del FEDER.-

El Reglamento de la CEE nº 4.254/88 del Consejo, de 19-12-88 por el que se aprueban disposiciones de regulación del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, establece en su artículo 1, el ámbito de intervención:

"En el marco de la función que le atribuye el artículo 130.c) del Tratado, el FEDER de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, participará en la financiación de:

a) Inversiones productivas que permitan la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo duraderos.

b) Inversiones en infraestructuras.

c) Desarrollo del potencial endógeno de las regiones mediante medidas de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local y a las actividades de las pequeñas y medianas empresas.

d) Actuaciones previstas en concepto de desarrollo regional a escala comunitaria, en particular cuando se trate de regiones fronterizas de los Estados Miembros, con arreglo al último párrafo del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88.

[1] El contenido de este apartado tres está recogido en el artículo dos de la Decisión que aprobó el M.C.A. de 31-10-89.

e) Medidas preparatorias de acompañamiento y de evaluación previstas en el artículo 7.

f) Inversiones productivas y en infraestructuras destinadas a proteger al Medio Ambiente cuando estén vinculadas al desarrollo regional".

El citado Reglamento establece que: "La concesión de ayuda comunitaria a regímenes de ayuda regional constituye una de las principales formas de fomento de la inversión a empresas."(Art.4.1)

El artículo 9 dice que: "La acción regional de la Comunidad se establecerá mediante estrecha concertación entre la Comisión, el Estado Miembro interesado y las autoridades competentes designadas por el mismo para la puesta en práctica de acciones a nivel regional."

El artículo 10 establece que: "De conformidad con el último párrafo del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, el FEDER podrá contribuir, además, a la financiación, a nivel comunitario, de:

a) Estudios realizados por iniciativa de la Comisión con vistas a identificar:

- Las consecuencias territoriales de las medidas proyectadas por las autoridades nacionales, en particular, en materia de grandes infraestructuras, que, por sus repercusiones, sobrepasen el ámbito nacional;

- Medidas para solventar los problemas específicos de las regiones fronterizas internas o externas de la Comunidad;

- Los elementos necesarios para establecer un sistema prospectivo de utilización del espacio comunitario;

b) Proyectos piloto que:

- Fomenten la construcción de infraestructuras, la inversión en empresas y la adopción de otras medidas específicas que tengan un marcado interés comunitario, en particular en las regiones fronterizas internas o externas de la Comunidad;

- Favorezcan el intercambio de experiencias y la cooperación en materia de desarrollo entre las regiones de la Comunidad, así como acciones innovadoras.

2. Por iniciativa de la Comisión, se podrá someter al Comité previsto en el artículo 27 del Reglamento (CEE) nº 4.253/88, cuestiones relativas al desarrollo regional a escala comunitaria, a la coordinación de las políticas regionales de los Estados Miembros o a cualquier problema ligado a la aplicación de la política regional comunitaria. El Comité podrá formular conclusiones comunes sobre cuya base la Comisión dirigirá en su caso, recomendaciones a los Estados Miembros".

El artículo 13 referido a la distribución indicativa de los recursos del FEDER señala que: "De conformidad con el apartado 6 del artículo 12 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, la Comisión decidirá antes del 1 de enero de 1989, para un período de 5 años y a título indicativo, la distribución entre los Estados Miembros del 85% de los créditos de compromiso del FEDER".

Mediante Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de fecha 31 de octubre de 1989 en el artículo 1 se aprobó el M.C.A. (Marco Comunitario de Apoyo) para las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones españolas incluidas en el objetivo nº 1, para el período comprendido entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1993.

Se dice en el citado artículo 1 que:

"La Comisión declara su intención de contribuir a la realización del presente Marco Comunitario de Apoyo con arreglo a las disposiciones pormenorizadas que el mismo comporta y de conformidad con las normas y orientaciones de los Fondos estructurales y de los demás instrumentos financieros existentes".

En su artículo 2 se establece que:

"El Marco Comunitario de Apoyo contiene los elementos esenciales siguientes:

a) Los ejes prioritarios principales seleccionados por la intervención conjunta, que son los siguientes:

- Integración y articulación territorial.
- Industria, servicios y artesanía.
- Turismo.
- Agricultura y desarrollo rural.
- Infraestructuras de Apoyo a las actividades económicas.
- Valoraciones de los recursos humanos.
- Asistencia técnica, acompañamiento e información.

b) Un resumen de las formas de intervención que se emplearán de manera preponderante bajo la forma de programas operativos.

c) Un plan de financiación indicativo, a precios constantes de 1989, en el que se precisa el coste total de los ejes prioritarios seleccionados por la acción conjunta de la Comunidad y del Estado Miembro afectado, que para la totalidad del período asciende a 18.408 millones de ECUS, así como el importe financiero contemplado en concepto de ayuda presupuestaria de la Comunidad, repartido como sigue:

FEDER.....	6.199.- millones de Ecus
FSE.....	2.348.- millones de Ecus
FEOGA (Orientación)	1.232.- millones de Ecus
TOTAL FONDOS ESTRUCTURALES	**9.779.- millones de Ecus**

La financiación nacional necesaria que resulta de este plan es aproximadamente de 6.728 millones para el sector público y de 1.901 millones de ecus para el sector privado, y puede ser parcialmente cubierta a través del recurso a los préstamos comunitarios procedentes del Banco Europeo de Inversiones (B.E.I.) y con los demás instrumentos de préstamos. A título indicativo, los préstamos del B.E.I. podrán alcanzar un importe de 1.818 millones de ecus, y los préstamos de la CEE un importe de 395 millones de ecus.

En el artículo 3, se establece que:

"El destinatario de la presente declaración de intenciones es el Reino de España".

Galicia, es una de las regiones españolas incluidas en el objetivo nº 1.

Este Marco Comunitario de Apoyo se estableció de acuerdo con el Estado Miembro (España) interesado, en el contexto de la cooperación definida en el artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88.

Los Marcos Comunitarios de Apoyo (MAC) constituyen un paso de vital importancia en la aplicación de la reforma de los Fondos Estructurales Comunitarios para las regiones incluidas en el objetivo nº 1, entre las que se encuentra Galicia, ya que prevén una financiación global comunitaria de 36.200

millones de ecus, destinada a impulsar las medidas prioritarias para fomentar el desarrollo de las regiones.

El Acta Única Europea, además de encomendar a la Comunidad la realización del Mercado Único, encomienda también el esfuerzo de la cohesión económica y social en toda la Comunidad con el fin de que no se acentúen las disparidades regionales, para ofrecer a todos sus ciudadanos las oportunidades que brinda 1992.

Los instrumentos de que dispone la Comunidad para hacer frente a este compromiso son los Fondos Estructurales: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección Orientación.

Existe un Marco Comunitario de Apoyo (MCA) para cada uno de los objetivos comunes definidos en el Reglamento Marco, siendo el primer objetivo el de fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.

Cada MCA es objeto de una negociación entre el Estado Miembro afectado y la Comisión y establece las prioridades de desarrollo sobre las cuales se acordó concentrar la ayuda comunitaria. Dado que supone un compromiso financiero indicativo por parte de la Comunidad para un período de 5 años, el MCA constituye una base sólida de planificación.

Las Entidades Regionales y Locales se comprometen a colaborar estrechamente con la Comisión y las autoridades centrales en la planificación y realización de las medidas de desarrollo en sus respectivas áreas. Sobre la base del MCA, todas las partes implicadas en la cooperación procederán a desarrollar programas y proyectos que concreten las prioridades definidas en el mismo.

En definitiva, el MCA constituye un elemento clave del soporte financiero que la Comunidad destina desde el 1 de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1993 al ajuste estructural y desarrollo económico de cada una de las regiones afectadas.

PLAN DE FINANCIACIÓN PROVISIONAL POR EJE Y POR FUENTE DE FINANCIACIÓN (PRECIOS 1.989).-(PERIODO 1-1-89 AL 31-12-93)

Objetivo nº 1 - Galicia (millones de ECUS)

EJES DE DESARROLLO	FEDER	F.S.E.	FEOGA	TOTAL
1.1.-Autopistas, autovías y carreteras	138			138
1.3.-Puertos	18			18
1.7.-Telecomunicación	3			3
1.-Integración,articulación territorial	**159**			**159**
2.1.-Ayudas a la industria y a la artesanía	9			9
2.2.-Ayudas a los servicios a las empresas	6			6
2.3.-Desarrollo local	20			20
2.4.-Zonas industriales y artesanales	6			6
2.-Industria,servicios y artesanía	**41**			**41**
3.1.-Ayudas a las inversiones turísticas	4			4
3.2.-Revalorización de los recursos culturales de interés turístico	4			4
3.-Turismo	**8**			**8**
4.1.-Mejora de las condiciones de la producción	6		90	96
4.2.-Protección del medio y conservación de los recursos naturales			17	17
4.3.-Acciones horizontales (objetivo 5a)			66	66
4.4.-Reorientación de las producciones y mejora de la calidad			12	12
4.-Agricultura y desarrollo rural	**6**		**185**	**191**
5.1.-Agua	29			29
5.2.-Energía	9			9
5.3.-Medio ambiente	19			19
5.4.-Investigación, desarrollo e innovación	6			6
5.5.-Equipamientos de formación	17			17
5.6.-Equipamientos sanitarios	16			16
5.-Infraestructuras de apoyo a las actividades económicas	**96**			**96**
6.1.-Medidas directamente relacionadas con los ejes de desarrollo		5		5
6.2.-Medidas multisociales		2		2
6.3.-Medidas del Reglamento (CEE) nº4.255/88.Art.1 (5 y 6)		1		1
6.-Valoración de los recursos humanos	**3**	**8**		**11**
7.-Asistencia técnica, acompañamiento e información	**3**			**3**
8.-Objetivos nº 3 y 4		**29**		**29**
TOTALES	**316**	**37**	**185**	**538**

Los créditos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1990 contienen los siguientes créditos del objetivo nº 1 del FEDER, correspondientes al Programa Operativo de Galicia 90-93.

(miles de pesetas)

Aplicación presupuestaria Comunidad Autónoma	Marco Comunitario de Apoyo.- Eje de Desarrollo.- Acción.-	Importe
06.04.412A.- Recursos Hidráulicos	1.2 y 2.1.2., Saneamiento y Depuración de Aguas	1.727.061.-
06.04.413B.- Carreteras	1.1.2. y 1.1.3., Articulación de los Ejes N-S y E-O y Mejora de las infraestructuras viales en zona litoral	3.472.712.-
06.04.414A.- Puertos	1.1.3. y 1.3.2., Construcción, conservación y explotación portuaria	443.000.-
07.01.322B.- Enseñanza Media	2.2.2.- Creación y ampliación de Centros de Formación Profesional y Universitarios	183.000.-
07.01.322C.- Enseñanza Universitaria		306.000.-
08.02.711D.- Apoyo a la Artesanía	2.1.- Ayudas a la Industria y a la Artesanía	60.000.-
13.02.312A.- Atención especializada	2.3.2.- Construcción y equipamiento de Centros de Atención Primaria	415.250.-
SUMA TOTAL		6.607.023.-

1.2.- Bases legales de actuación del Consello de Contas.-

El Estatuto de Autonomía de Galicia asume el poder presupuestario de la Comunidad Autónoma en los artículos 10. b) y 53. Asimismo, el artículo 17 de la LOFCA reconoce a éstas competencias normativas de acuerdo con sus respectivos Estatutos, la elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos.

Los artículos 136 y 153.d) de la Constitución Española consideran al Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del Sector Público, atribuyéndole el control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas.

La LOFCA en su artículo 22 reitera lo dispuesto en el artículo 153. d) de la Constitución y lo completa al sentar que el control económico y presupuestario de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas puede concurrir tanto en el Tribunal de Cuentas como en otros sistemas e instituciones de control de carácter comunitario.

El Estatuto de Autonomía de Galicia en su artículo 53.2) prevé la creación de sus propios órganos de control económico y presupuestario externo.

La Ley 6/1985 del 24 de junio, del Consello de Contas, regula la organización y funcionamiento del citado organismo y establece las garantías, normas y procedimientos para asegurar la rendición de las cuentas de la Comunidad Autónoma, que deberá someterse a la aprobación del Parlamento.

El artículo 4 de la referida Ley establece entre otras las siguientes funciones:

- Fiscalizar la actividad económica y financiera del sector público de Galicia, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico y al principio de racionalidad, determinado por criterios de eficiencia y economía.

- Fiscalizar las subvenciones, los créditos y las ayudas con cargo a los Presupuestos de los Entes Públicos Gallegos, así como los avales y exenciones fiscales directas y personales concedidas para aquellos Entes, ya sean percibidas por personas físicas o jurídicas.

- Fiscalizar los contratos celebrados por la Administración Autonómica y otros Entes del Sector Público de Galicia, en los casos que se establezcan así como lo que el Consello considere conveniente.

- Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, ayudas y de los avales e indicar, en su caso, las causas del incumplimiento.

El Reglamento de Régimen Interior del Consello de Contas, aprobado por el Parlamento de Galicia en Resolución de fecha 25 de junio de 1992 en su Capítulo II, artículo 2.3 establece:

"Asimismo el Consello de Contas practicará cuantas acciones fiscalizadoras le sean delegadas por los órganos de control externo de la CEE, de conformidad con la legislación que fuere aplicable."

El Reglamento (CEE) nº 4.253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra parte, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos existentes, en su artículo 23 establece:

"1.- A fin de garantizar el éxito de las acciones llevadas a cabo por promotores públicos o privados, los Estados Miembros adoptarán las medidas necesarias para:

- Verificar regularmente que las acciones financiadas por la Comunidad se han realizado correctamente.

- Prevenir y perseguir irregularidades.

- Recuperar los fondos perdidos por abusos o negligencia, salvo si el Estado Miembro y/o el intermediario y/o el promotor prueban que no les es imputable el abuso o la negligencia en cuestión, el Estado Miembro será responsable subsidiario del reembolso de las cantidades abonadas indebidamente.

Los Estados Miembros informarán a la Comisión de las medidas adoptadas al efecto y, en particular, del desarrollo de las diligencias administrativas y judiciales".

2.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CONTROL REALIZADO.-

El control realizado por este Consello de Contas tiene como objetivo dar cumplimiento a las funciones que la Ley del Consello de Contas le atribuye en el artículo 4, presentando un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con el F.E.D.E.R.

Los objetivos y el alcance del presente informe son los siguientes:

Objetivo nº 1.-

Verificar y evaluar el grado de cumplimiento legal de la contratación administrativa de los proyectos financiados con el FEDER, analizando:

- La autorización del expediente y el Sistema de Contratación.
- Pliego de Cláusulas Administrativas y Resolución Aprobatoria del mismo.
- Informe de la Asesoría Jurídica.
- Certificación de existencia de crédito.
- Propuesta de Gasto y Fiscalización de la Intervención.
- Convocatoria de la Contratación.
- Acta de la Mesa de Contratación.
- Documentación de las Empresas presentadas.
- Resolución de Adjudicación.
- Contrato Administrativo.
- Fianza Definitiva.
- Acta de Replanteo.
- Actas de Recepción Provisional y Definitiva.

Verificar y evaluar el grado de ejecución de los proyectos financiados con el FEDER, analizando:

- Las modificaciones de proyectos.
- La ejecución por programas de inversión.
- La regularidad contable de los créditos del FEDER, comprobando la adecuada imputación contable al período y concepto que les corresponden.
- La regularidad legal de las actuaciones realizadas por los del FEDER, atendiendo fundamentalmente a la contratación administrativa y a la naturaleza de los gastos realizados, análisis de las modificaciones,aplicación de la contabilidad financiera y analítica a los proyectos del FEDER.
- Los ingresos provenientes del FEDER
- Cofinanciación con FCI y fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Objetivo nº 2.-

Evaluar el control interno de la Administración de la Xunta de Galicia en lo que respecta a la coordinación, control y seguimiento del FEDER.

Alcance.-

El presente informe abarca los proyectos de inversión que en el ejercicio 1990, están financiados con cargo al FEDER dotado en el ejercicio 1990.

3.- METODOLOGÍA.-

3.1.- Período de ejecución.-

El artículo 20 del Reglamento (CEE) nº 4.253/88 del Consejo del 19 de diciembre establece:

"1. Los compromisos presupuestarios se contraerán en función de las Decisiones de la Comisión por las que se aprueben las acciones correspondientes. Serán válidos durante un periodo cuya duración dependerá de la naturaleza y de las condiciones específicas de ejecución de dichas acciones.

2. Los compromisos para acciones de duración igual o superior a dos años se realizarán, por norma general, por tramos anuales. El compromiso para el primer tramo se producirá cuando la Comisión adopte la Decisión aprobando la acción.

El compromiso de los siguientes tramos se basará en el plan de financiación de la acción y en los avances realizados en la ejecución de la misma.

3. Respecto a las acciones que tengan una duración inferior a dos años, el compromiso de la cuantía total de ayuda comunitaria se contraerá cuando la Comisión adopte la Decisión por la que se aprueba la acción".

El período de ejecución de la presente fiscalización se refiere a las dotaciones del FEDER que figuran en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia del ejercicio 1990.

3.2.- Determinación del grado de ejecución.-

La noción del grado de ejecución corre pareja al desarrollo o avance de los proyectos de inversión, de tal forma que su cuantificación irá aumentando progresivamente a medida que se cubran las diferentes fases presupuestarias. Existen distintos niveles de cuantificación del grado de ejecución en función de la fase presupuestaria en la que para ello nos situemos. La decisión que se expone es la de establecer cual de estos niveles de cuantificación resulta pertinente considerar en cada ocasión.

En la contabilidad de los gastos públicos, el término créditos comprometidos equivale a los compromisos contraídos con cargo a los créditos del Presupuesto de Gastos, créditos que, en definitiva se deben encontrar en la fase contable D (Disposición). Esta interpretación aparece claramente recogida en la nueva versión del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Resolución de 11 de noviembre de 1983 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Las obligaciones reconocidas constituyen el segundo nivel de cuantificación del grado de ejecución, y se corresponde con los créditos que se encuentran en la fase contable O (Obligación), que posteriormente dará lugar a la emisión de la propuesta de pago (Fase K).

Finalmente, una tercera cuantificación del grado de ejecución se identificaría con la situación de pagado u ordenado el pago, que se traduce en la fase contable P.

En este informe se muestra la cuantificación que consideramos más significativa de los créditos, en sus fases de obligaciones reconocidas y pagos ordenados, por proyectos financiados con las dotaciones del FEDER, a 31 de diciembre de 1990, de conformidad con el artículo 54.3 y 54.4, de la Ley 3/1984, de 3 de abril, de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia que establece:

"54.3.- El reconocimiento de la obligación, que es la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Comunidad de Galicia, que deban acreditarse como contraprestación económica derivada de los acuerdos, conciertos o normas resolutorias que determinen la disposición de un crédito, una vez realizada y justificada adecuadamente la correspondiente prestación y efectuada la pertinente liquidación.

54.4.- La ordenación del pago, que es la operación en virtud de la cual el ordenador competente expide, considerada la existencia de una obligación

reconocida y concreta, la orden de pago contra la Tesorería de la Comunidad a favor del respectivo acreedor".

El Reglamento (CEE) nº 4.253/88 del Consejo del 19-12-88 establece en su artículo 21:

"1. El pago de las ayudas financieras se efectuará de conformidad con los compromisos presupuestarios y se hará llegar a la autoridad designada al efecto en la solicitud presentada por el Estado Miembro correspondiente. Podrá adoptar bien la forma de anticipo bien la de pago definitivo, referido a los gastos efectivos realizados. Para las acciones de una duración igual o superior a dos años, los pagos se referirán a los tramos anuales de los compromisos contemplados en el apartado dos del artículo 20.

2. El anticipo abonado por cada uno de los compromisos podrá alcanzar el 50% de la cantidad comprometida, habida cuenta de la naturaleza de la acción de que se trate.

3. Un segundo anticipo, calculado de forma que la cuantía acumulada de los dos anticipos no exceda del 80% del compromiso, se abonará cuando el organismo responsable haya certificado que por lo menos la mitad del primer anticipo ha sido utilizada y que la acción avanza a un ritmo satisfactorio y de conformidad con los objetivos previstos.

4. El pago definitivo del saldo de cada uno de los compromisos se efectuará si:

- La autoridad designada que se menciona en el apartado 1 presenta a la Comisión una solicitud de pago dentro de los seis meses siguientes al final del año de que se trate o a la terminación material de la acción.

- Se presentan a la Comisión los informes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 25.

- El Estado Miembro envía a la Comisión un certificado en el que se confirmen los datos facilitados en la solicitud de pago y los informes.

5. Los Estados Miembros designarán a las autoridades facultadas para expedir los certificados a los que se refieren los apartados 3 y 4, y procurarán que los beneficiarios reciban los anticipos y los pagos en el más breve plazo".

De acuerdo con este Reglamento, a priori, la Comunidad Autónoma con el FEDER goza de financiación anticipada, al poder recibir el 50% de los compromisos, que se producen cuando la Comisión aprueba la acción, lo que permite tener Tesorería anticipada para los futuros pagos de certificaciones de obras y honorarios de dirección de los proyectos cofinanciados con el FEDER.

Este es el principal motivo por el que existe superávit de caja, como se analizará en el apartado 4.3. de este informe.

3.3.- Descripción del trabajo realizado.-

El Consello de Contas, con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el apartado 2 de este informe, aplicó los procedimientos y llevó a cabo las pruebas de auditoría que estimó precisas y ajustadas a las circunstancias y al alcance del control realizado.

El trabajo se desarrolló recabando la documentación pertinente y realizando visitas a las Consellerías de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, Educación y Ordenación Universitaria, Industria y Comercio y Sanidad.

Los procedimientos seguidos y las pruebas realizadas consistieron fundamentalmente, en lo siguiente:

1º).- Evaluación del control interno en lo que se refiere al seguimiento del FEDER, por parte de la Administración de la Xunta de Galicia, fundamentalmente en la contratación administrativa, y en los instrumentos de coordinación y control existentes y en la fluidez y calidad de la información que se genera.

2º).- Verificación de la dotación inicial incluida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1990 como FEDER, identificando sus proyectos de inversión por la clave de financiación 05 y su imputación al Capítulo VI por el artículo 69.

Analizando posteriormente si tuvieron lugar modificaciones que hicieran variar la mencionada dotación inicial y la revisión con su correspondiente documentación soporte en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales establecidos.

3º).- Solicitar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia la relación individualizada de los proyectos de inversión financiados con recursos del FEDER, en el Presupuesto de 1990, con el detalle del grado de ejecución al final del ejercicio y la relación individualizada de los ingresos recibidos de la Administración Central durante 1990, correspondientes al FEDER del ejercicio presupuestario 1990.

4º).- Comprobar con el Libro Mayor de la Contabilidad Presupuestaria y con el Libro de Liquidación del Presupuesto, la fase contable en la que se encontraban los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 1990.

La Comunidad Autónoma no tiene implantado el sistema de proyectos de inversión ni la Contabilidad analítica de los citados proyectos financiados con el FEDER. Por otra parte, no se pudo conciliar el Libro Mayor de Contabilidad Presupuestaria con la contabilidad financiera, al no estar implantada esta última en la Comunidad Autónoma en el ejercicio 1990.

5º).- Analizar las variaciones producidas entre los proyectos de inversión iniciales que integran el FEDER para 1990 y los finalmente ejecutados por la Comunidad Autónoma de Galicia.

6º).- Analizar una muestra de proyectos de inversión con el objeto de verificar la existencia y adecuación de la documentación justificativa de la ejecución presupuestaria, en las fases de créditos comprometidos, obligaciones reconocidas y pagos realizados. La muestra auditada fue del 57,14% de las aplicaciones presupuestarias y del 91,69% del importe presupuestario.

7º).- Obtener los "importes solicitados" por la Administración Autonómica a la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de percibir las dotaciones del FEDER que corresponden a la Comunidad Gallega, y analizar la correspondiente documentación soporte.

8º).- Verificar los importes reembolsados por la Administración Central con la documentación soporte de éstos, y su correcta contabilización por parte de la Administración de la Comunidad de Galicia.

9º).- Comparar los pagos realizados por la Administración Autonómica en el año 1990 con los importes solicitados a la Administración Central a efectos de la percepción de las correspondientes dotaciones y los anticipos de los compromisos presupuestarios recibidos (artículo 21 del Reglamento (CEE) nº 4.253/88).

10º).- Analizar el tiempo transcurrido entre la fecha de tramitación de la solicitud por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma a la Central y de la fecha efectiva del reembolso.

4.- ANÁLISIS DEL GRADO DE EJECUCIÓN.-

4.1.- Ejecución en el ejercicio 1990 de los Proyectos de Inversión financiados con el FEDER-90.-

4.1.1.- Dotación inicial del FEDER en el ejercicio 1990.-

Los anexos de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 1990, incluyen la relación individualizada de los proyectos que inicialmente se financiarán con el FEDER de dicho ejercicio.

En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma figuran créditos iniciales con la clave de financiación del FEDER (5) por importe total de pesetas 6.607.023.252 .- con el siguiente desglose:

Capítulo VI..... 6.547.023.252.-
Capítulo VII..... 60.000.000.-

Total FEDER..... 6.607.023.252.-

El desglose de las dotaciones iniciales consta de 110 proyectos de inversión en el Capítulo VI por importe de 6.547.023.- miles de pesetas y un crédito en el Capítulo VII por importe de 60.000.- miles de pesetas, siendo el importe total de 6.607.023.- miles de pesetas.

Dotación Inicial del FEDER - 90 por Consellerías, Servicios y Programas.

CAPÍTULO VI	Miles de Pesetas	%
CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
06.04.412A - Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos	1.727.061	
06.04.413B - Construcción, conservación y explotación de carreteras	3.472.712	
06.04.414A - Construcción, conservación y explotación portuaria	443.000	
TOTAL	5.642.773	85,4%
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA		
07.01.322B - Enseñanza Media	183.000	
07.01.322C - Enseñanza Universitaria	306.000	
TOTAL	489.000	7,4%
CONSELLERÍA DE SANIDAD		
13.02.312A - Atención especializada	415.250	
TOTAL	415.250	6,3%
TOTAL CAPÍTULO VI	**6.547.023**	99,1%
CAPÍTULO VII		
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
08.02.711D.- Apoyo a la Artesanía	60.000	0,9%
TOTAL CAPÍTULO VII	**60.000**	0,9%
TOTAL DOTACIÓN INICIAL FEDER 1990	**6.607.023**	100%

4.1.2.- Modificaciones producidas en las dotaciones iniciales del FEDER-1990.-

Las modificaciones afectaron a los proyectos de inversión inicialmente acordados, consistiendo básicamente en modificaciones sobre las consignaciones iniciales (cambios cuantitativos) y en sustituciones de proyectos (cambios cualitativos).

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, el número inicial de proyectos incluidos en el FEDER fue de 110.

De estos proyectos, un número de 43 con un presupuesto total de 2.823.784.- miles de pesetas no fueron modificados durante el ejercicio.

Las modificaciones fueron las siguientes:

- 23 proyectos, con una dotación inicial de 698.044.- miles de pesetas fueron totalmente sustituidos.

- 44 proyectos, con una dotación inicial de 3.025.195.- miles de pesetas fueron modificados cuantitativamente hasta una dotación final de 3.449.325.- miles de pesetas.

- Se incluyeron 29 proyectos nuevos, con una dotación de 273.914.- miles de pesetas.

Lo descrito anteriormente se resume como sigue:

Capítulo VI (miles de pesetas)

PROYECTOS	COMUNIDAD AUTÓNOMA 1-1-90		COMUNIDAD AUTÓNOMA 31-12-90	
	Número	Dotación	Número	Dotación
No varían	43	2.823.784	43	2.823.784
Totalmente sustituidos	23	698.044	—	—
Modificados	44	3.025.195	44	3.449.325
Nuevos	—	—	29	273.914
TOTAL	110	6.547.023	116	6.547.023

A continuación se relacionan todos los proyectos con la dotación inicial a 1-1-1990 y con la dotación final a 31-12-1990 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS (412A)
DOTACIÓN: 1.727.060.983

Nº EXPED.	DENOM.PROY.	DOTACIÓN INICIAL 1 - 1 - 90	DOTACIÓN FINAL 31 - 12 - 90	DIFERENCIAS
399	Nueva impulsión y abast.Ourense	96.250.000	96.250.000	0
400	ETAP de Redondela	56.650.000	56.650.000	0
401	Abastecimiento Malpica	55.000.000	85.000.000	30.000.000
402	Mejora de la conducción abast. Ourense	52.250.000	52.250.000	0
403	Abast. de agua Pontev.-Sanxen.-Marín	55.000.000	125.000.000	70.000.000
404	Renovac. válv. recreac- P. Forcadas	77.000.000	77.000.000	0
405	Conduc. marg. de la ría Pontev.-Sanxen.	27.500.000	27.500.000	0
406	Reparación depósitos Ferrol	27.500.000	27.500.000	0
407	Ampliación ETAP A Telva A Coruña	71.500.000	0	-71.500.000
408	Abast. Cambre-Sada-Bergondo-Oleiros	27.500.000	27.500.000	0
409	Mejora conducción abast. Ferrol	27.500.000	27.500.000	0
410	Anillo perimetral red distrib. O Barco	27.500.000	27.500.000	0
411	Anillo perimetral red distrib. Sarria	27.500.000	27.500.000	0
412	ETAP y red distribución Baiona	13.750.000	13.790.000	40.000
413	Tubería Maes. dist.Narón-Fene-Ares	27.500.000	27.500.000	0
414	Terminac. abast. Porriño y Polig. Ind.	27.500.000	27.500.000	0
415	Saneam. Península Torre A Coruña	60.000.000	60.000.000	0
416	Saneamiento Coruxo-Canido	60.000.000	110.000.000	50.000.000
417	Colector general Ferrol	60.000.000	88.000.000	28.000.000
418	Saneamiento integral Arteixo	54.000.000	54.000.000	0
419	Evacuac. saneam. Fuchiños-Canido	25.680.000	50.680.000	25.000.000
420	Colector GIJ3 Valadares-Lagares	47.400.000	29.315.830	-18.084.170
421	EDAR Cuntis	45.000.000	30.000.000	-15.000.000
422	Saneam. San Xoan Piñeiro-Mugardos	40.980.983	39.474.527	-1.506.456
423	Abastec. Balón-Doniños-Brión-Cobas	55.000.000	96.500.000	41.500.000
424	ETAP de Cambados O Grove	87.500.000	83.175.831	-4.324.169
425	Colector del margen inferior A Coruña	128.850.000	120.521.685	-8.328.315
426	EDAR de LUGO	65.000.000	65.000.000	0
427	EDAR de Monforte	49.000.000	49.000.000	0
428	EDAR emisario submarino Vigo	122.250.000	47.250.000	-75.000.000
429	Colector borde R.Lagares Vigo	39.000.000	39.000.000	0
430	Ampliación abast.saneam.Ribadavia	90.000.000	20.000.000	-70.000.000
	Saldo de Créditos.	0	19.203.110	19.203.110
TOTAL APLIC. 06.04.412A		1.727.060.983	1.727.060.983	0

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS (413B)
DOTACIÓN: 3.472.712.269

Nº EXPED.	DENOM.PROY.	DOTACIÓN INICIAL 1 - 1 - 90	DOTACIÓN FINAL 31 - 12 - 90	DIFERENCIAS
167	N/AC/87.3 Autopista-Lanza	75.000.000	107.082.214	32.082.214
168	N/LU/87.4.2 Masmas-Adelán	250.000.000	250.000.000	0
169	N/AC/87.2.2 Curtis-Corredoiras	75.000.000	2.521.920	-72.478.080
170	N/AC/87.2.3 Corredoiras - Melide	25.000.000	0	-25.000.000
171	N/AC/87.2.4 Melide - Límite de Pontevedra	25.000.000	0	-25.000.000
172	N/PO/89.14 Límite Coruña - Golada	25.000.000	0	-25.000.000
173	N/PO/85.6 Mejora Pontevea-A Estrada	100.000.000	100.000.000	0
174	N/LU/87.6.2. Sarria-Bóveda	100.000.000	213.430.858	113.430.858
175	N/OUR/85.4.1 Viana do B.-Cambela	200.000.000	280.000.000	80.000.000
176	N/LU/85.2.1 Monforte - Escairón	50.000.000	0	-50.000.000
177	N/LU/85.2.2. Escairón-Ponte Rio Miño	100.000.000	159.980.000	59.980.000
178	N/LU/89.4 Chantada-Alto do Faro	25.000.000	9.999.000	-15.001.000
179	N/PO/89.12 Alto do Faro-Lalín	37.500.000	7.849.280	-29.650.720
180	N/OUR/85.6.1 Ribadavia-Leiro	225.000.000	201.366.830	-23.633.170
181	N/OUR/85.6.3 Leiro-Carballiño	50.000.000	34.410.993	-15.589.007
182	N/LU/87.2.0 Fonsagrada - A Lastra	50.000.000	0	-50.000.000
183	N/LU/87.5. Rábade-Vilalba	31.145.968	4.944.499	-26.201.469
184	N/PO/83.5.2 Oia-A Guarda	200.000.000	200.000.000	0
185	N/AC/87.1.1 Muros-Carnota	100.000.000	150.000.000	50.000.000
186	N/AC/87.1.2 Carnota-Ezaro	25.000.000	22.100.157	-2.899.843
187	N/AC/85.3.1 Baio-Vimianzo	225.000.000	254.790.846	29.790.846
188	N/AC/85.3.2 Vimianzo-Berdeogas	50.000.000	104.050.502	54.050.502
189	N/AC/85.3.3 Berdeogas - Cee	25.000.000	0	-25.000.000
190	N/AC/85.1 Nuevo acceso a Rianxo	350.000.000	360.623.022	10.623.022
191	N/AC/88.1 Rianxo - Boiro	100.000.000	0	-100.000.000
192	N/AC/87.8.2 Boiro - P. Caramiñal	25.000.000	0	-25.000.000
193	N/PO/87.3. Bueu-Cangas	200.000.000	200.000.000	0
194	N/AC/84.2.2 Valdoviño-Cedeira	8.843.353	8.843.353	0
195	N/OUR/83.1.0 Ourense-Bentraces	168.158.125	168.158.125	0
196	N/AC/87.2.1 Oza-Curtis	160.826.986	361.726.526	200.899.540
197	N/LU/85.2.3 Puente Miño-Chantada	106.728.573	106.728.573	0
198	N/AC/85.2 A Coruña- Baños Arteixo	87.014.484	87.014.484	0
199	2/PO/320.3 Ramallosa-Baiona	117.500.000	11.500.000	-106.000.000
200	N/AC/88.2 Betanzos-Mesón do Vento	11.890.082	11.890.082	0
201	N/AC/83.3.4.1 Folgosas - Moeche	102.817	0	-102.817
202	N/OUR/83.8.1 Esgos-Alto do Rodicio	21.207.270	19.124.770	-2.082.500
203	N/PO/84.2.1 Vincios-Porriño	43.103.615	30.449.183	-12.654.432
204	N/PO/87.1 Folgoso Cachafeiro	1.599.966	0	-1.599.966
205	N/PO/87.2.2 Alto da Fraga - Silvestre	2.091.030	0	-2.091.030
	N/PO/88.1 Ramallosa-Baiona	0	3.842.200	3.842.200
	Saldo de Créditos.	0	284.852	284.852
TOTAL APLIC.06.04.413B		**3.472.712.269**	**3.472.712.269**	**0**

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA (414A)
DOTACIÓN: 443.000.000

Nº EXPED.	DENOM.PROY.	DOTACIÓN INICIAL 1 - 1 - 90	DOTACIÓN FINAL 31 - 12 - 90	DIFERENCIAS
283	Dársena en Ribadeo	8.048.456	8.048.456	0
284	Mejora muelle Mirasol	11.788.027	11.788.027	0
285	Dragado y creación explanada Cilleiro	7.072.296	7.072.296	0
287	Prolong. dique-muelle Porto Burela	24.754.001	24.754.001	0
289	Acondicionamiento Puerto y Ría de Foz	30.950.000	30.950.000	0
290	Mejora y ampliac. atraques en Cariño	120.800.000	120.800.000	0
290	Ampliación del puerto de Camariñas	101.587.220	101.587.220	0
293	Obras de atraque de Laxe	20.500.000	20.500.000	0
294	Obras de abrigo en A Guarda	50.000.000	50.000.000	0
295	Nuevo muelle en el Grove-amplic.atraque	50.000.000	50.000.000	0
296	Ampliación de atraque en Cedeira	5.000.000	0	-5.000.000
298	Ampliación de atraque en Cedeira	12.500.000	17.500.000	5.000.000
TOTAL APLICAC. 06.04.414A		**443.000.000**	**443.000.000**	**0**

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (07)
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (01)
ENSEÑANZAS MEDIAS (322B)
DOTACIÓN: 183.000.000

Nº EXPED.	DENOM.PROY.	DOTACIÓN INICIAL 1 - 1 - 90	DOTACIÓN FINAL 31 - 12 - 90	DIFERENCIAS
10	Módulo imagen y sonido A Coruña	84.000.000	84.000.000	0
20	FP 640 p.e. Narón A Coruña	99.000.000	99.000.000	0
TOTAL APLICAC. 07.01.322B		**183.000.000**	**183.000.000**	**0**

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (07)
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (01)
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (322C)
DOTACIÓN: 306.000.000

Nº EXPED.	DENOM.PROY.	DOTACIÓN INICIAL 1 - 1 - 90	DOTACIÓN FINAL 31 - 12 - 90	DIFERENCIAS
10	Escuela ingenieros agrónomos Lugo	210.000.000	210.000.000	0
20	Escuela informática A Coruña	30.000.000	30.000.000	0
30	Escuela Polit. Alimentación Ourense	36.000.000	36.000.000	0
40	Ciencias del mar Vigo	30.000.000	30.000.000	0
TOTAL APLICAC. 07.01.322C		**306.000.000**	**306.000.000**	**0**

CONSELLERÍA DE SANIDAD (13)
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (02)
ASISTENCIA SANITARIA (312A)
DOTACIÓN: 415.250.000

Nº EXPED.	DENOM.PROY.	DOTACIÓN INICIAL 1 - 1 - 90	DOTACIÓN FINAL 31 - 12 - 90	DIFERENCIAS
82	Centro Hospitalario Toén	7.500.000	7.500.000	0
90	Equipamientos Centros Salud	50.000.000	0	-50.000.000
91	Construcción Centros de Salud	64.000.000	0	-64.000.000
92	Centro Salud Cabanas - Nantón	5.000.000	0	-5.000.000
93	Centro Salud Fisterra	3.000.000	0	-3.000.000
94	Obras Constr. Centro salud Muxia	16.000.000	27.492.430	11.492.430
95	Centro Salud Porto do Son	15.000.000	0	-15.000.000
96	Obras Constr. Centro Sada	7.000.000	65.043.385	58.043.385
97	Construcción Centros de Salud	36.750.000	0	-36.750.000
98	Hon. Direcc. Obra Centro S. Barreiros	7.000.000	1.179.850	-5.820.150
99	Centros Salud Portomarín	10.000.000	0	-10.000.000
100	Construcción Centros de Salud	45.500.000	0	-45.500.000
101	Honor. Dirección Centro Baltar	9.000.000	2.145.259	-6.854.741
102	Centro Salud Cortegada	13.000.000	0	-13.000.000
103	Constr. Centro Irixo	6.000.000	14.940.719	8.940.719
104	Reformado obras centro Maside	8.000.000	15.021.590	7.021.590
105	Honor. Direcc. Obra Centro A Veiga	14.000.000	1.182.930	-12.817.070
106	Construcción Centros Salud	50.500.000	0	-50.500.000
107	Hon. Compl. Redac. C. Estrada oca	7.000.000	179.200	-6.820.800
108	Honor. Redacc. Obra C. Pontecesures	9.000.000	865.916	-8.134.084
109	Constr. Centro Chapela	32.000.000	29.115.003	-2.884.997
	Obra constr. Consultorio Guisamo	0	11.278.533	11.278.533
	Ref. Proy. Centro Ramirás	0	15.591.080	15.591.080
	Constr. Centro Vilanova de Arousa	0	44.753.316	44.753.316
	Obras centro Meaño-Dena.	0	3323943	3.323.943
	Hon. Direcc. Centro Louxame	0	76.551	76.551
	Constr. Centro Salud Leiro	0	13.180.508	13.180.508
	Reformado Obras C. Culleredo	0	8.979.599	8.979.599
	Centro Castrelo do Val	0	1.498.503	1.498.503
	Hon. Direcc. Centro Castro-Carballedo	0	454.608	454.608
	Hon. Direcc. obra Centro San Sadurniño	0	1.083.432	1.083.432
	Contr. Centro Salud Avión	0	22.886.068	22.886.068
	Obras Higiene Centro Becerrea	0	4.864.743	4.864.743
	Liquid. Provis. Centro Meis	0	1.420.769	1.420.769
	Constr. Centro Salud Vilamartín	0	11.492.691	11.492.691
	Liq. Prov. Obra C. Salud Cambre	0	3.419.531	3.419.531
	Liqu. Prov. Obra Constr. Centro Lobios	0	4.874.951	4.874.951
	Liquid. Prov.Centro Teixeira	0	2.329.578	2.329.578
	Liq. prov.C.Chandrexa de Queixa	0	2.038.670	2.038.670
	Hon. Dir. Liq. Prov. C. A. P. ESpc.Vigo	0	1.703.261	1.703.261
	Liqu. Obra C. Serra-Oural	0	1.597.481	1.597.481
	Obra Constr. Centro Laxe	0	12.357.373	12.357.373
	Hon. Direcc.Centro San Xoan Río	0	761.800	761.800
	Obra Liq. C. Saúde Sandias	0	2.193.582	2.193.582
	Rev. Precios obra Vilar de Santos	0	250.928	250.928
	50% Obra Art. Centro Salud con destino	0	2.619.162	2.619.162
	Saldo de Créditos.	0	75.553.057	75.553.057
TOTAL APLICAC. 13.02.312A		415.250.000	415.250.000	0

4.1.3.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. (Cuadros nºs. 1, 2 y 3).-

Es la Consellería más inversora de la Xunta de Galicia. La dotación del FEDER de 1990 representa el 85,40% de las totales iniciales del FEDER de 1990 de la Comunidad Autónoma, con una dotación final de Ptas.- 5.642.773.252.

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación final fue del 97,56% y el de pagos del 62,44 %, superando en lo que respecta a las mismas en más de 10 puntos a la media de la Comunidad.

Su ejecución se considera casi inmejorable, dado que las obligaciones reconocidas están cerca del 100%.

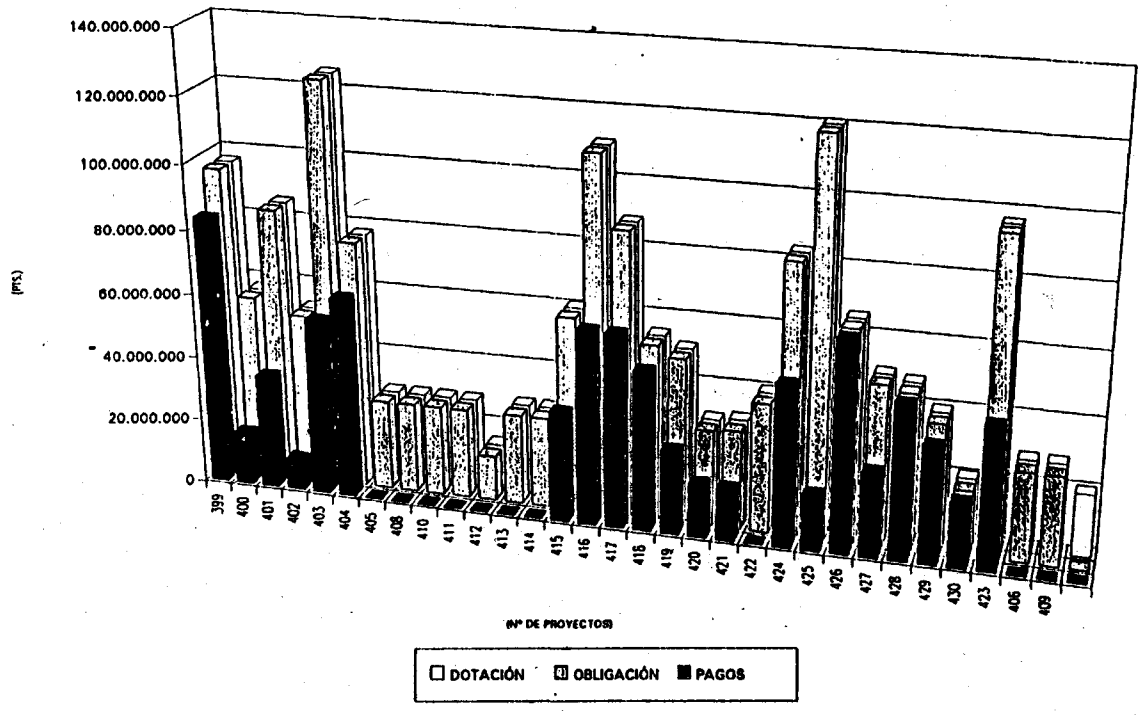
El total de proyectos iniciales fue de 83, repartidos en 3 programas, habiéndose ejecutados prácticamente todos los proyectos, excepto el número 169 de denominación N/AC/87.2.2 Curtis-Corredoiras.

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS (412A)
DOTACIÓN: 1.727.060.983

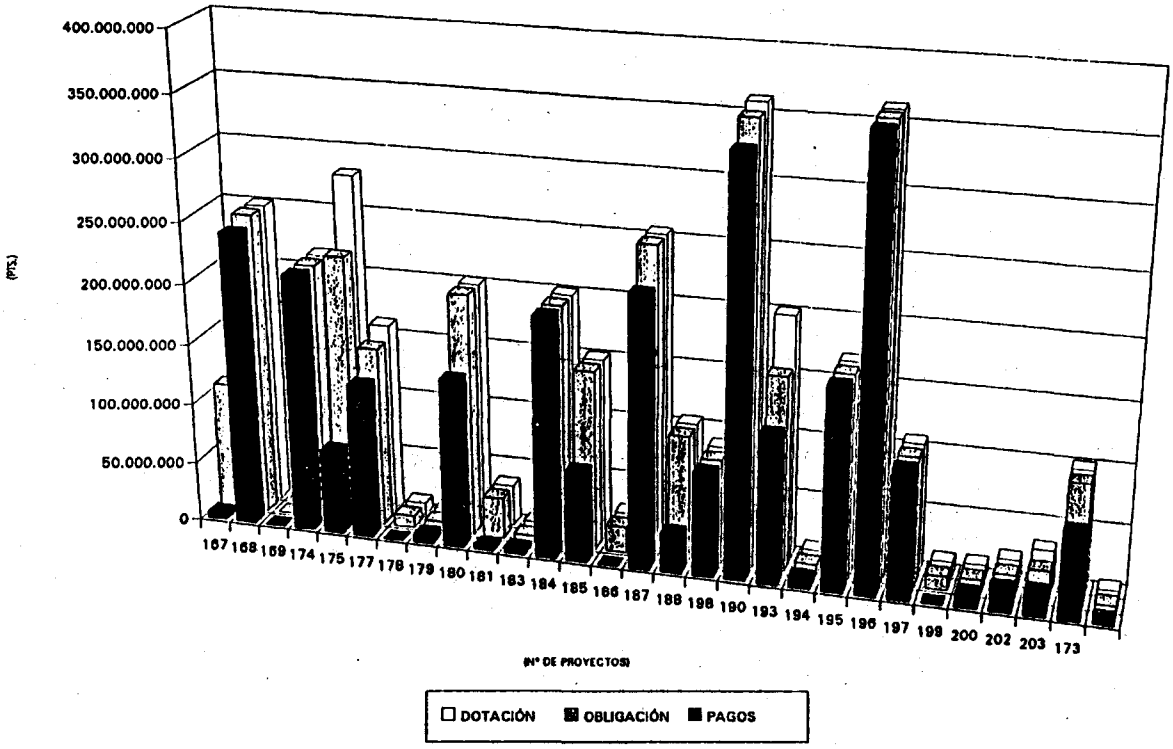
Nº DE EXPED.	DENOMINACIÓN PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC./ D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
399	Nueva impulsión y abast.Ourense	96.250.000	96.250.000	100,00%	83.913.232	87,18%
400	ETAP de Redondela	56.650.000	56.650.000	100,00%	16.067.963	28,36%
401	Abastecimiento Malpica	85.000.000	85.000.000	100,00%	35.309.113	41,54%
402	Mejora de la conducción abast. Ourense	52.250.000	52.250.000	100,00%	9.533.463	18,25%
403	Abast. de agua Pontev.-Sanxen.-Marín	125.000.000	125.000.000	100,00%	55.000.000	44,00%
404	Renovac. válv. recreac- P. Forcadas	77.000.000	77.000.000	100,00%	62.639.306	81,35%
405	Conduc. marg. de la ría Pontev.-Sanxen.	27.500.000	27.500.000	100,00%	0	0,00%
406	Reparación depósitos Ferrol	27.500.000	27.500.000	100,00%	0	0,00%
408	Abast. Cambre-Sada-Bergondo-Oleiros	27.500.000	27.500.000	100,00%	12.759.269	46,40%
409	Mejora conducción abast. Ferrol	27.500.000	27.500.000	100,00%	0	0,00%
410	Anillo perimetral red distrib. O Barco	27.500.000	27.500.000	100,00%	0	0,00%
411	Anillo perimetral red distrib. Sarria	27.500.000	27.500.000	100,00%	0	0,00%
412	ETAP y red distribución Baiona	13.790.000	13.750.000	99,71%	0	0,00%
413	Tubería Maes. dist.Narón-Fene-Ares	27.500.000	27.500.000	100,00%	0	0,00%
414	Terminac. abast. Porriño y Políg. Ind.	27.500.000	27.500.000	100,00%	0	0,00%
415	Saneam. Península Torre A Coruña	60.000.000	60.000.000	100,00%	59.165.357	98,61%
416	Saneamiento Coruxo-Canido	110.000.000	110.000.000	100,00%	60.000.000	54,55%
417	Colector general Ferrol	88.000.000	88.000.000	100,00%	59.972.887	68,15%
418	Saneamiento integral Arteixo	54.000.000	54.000.000	100,00%	54.000.000	100,00%
419	Evacuac. saneam. Fuchiños-Canido	50.680.000	50.680.000	100,00%	25.680.000	50,67%
420	Colector GLI3 Valadares-Lagares	29.315.830	29.315.830	100,00%	16.343.070	55,75%
421	EDAR Cuntis	30.000.000	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%
422	Saneam. San Xoan Piñeiro-Mugardos	39.474.527	39.474.527	100,00%	31.519.671	79,85%
423	Abastec. Balón-Doniños-Brión-Cobas	96.500.000	96.500.000	100,00%	43.754.187	45,34%
424	ETAP de Cambados O Grove	83.175.831	83.175.831	100,00%	49.662.494	59,71%
425	Colector del margen inferior A Coruña	120.521.685	120.521.685	100,00%	42.482.395	35,25%
426	EDAR de LUGO	65.000.000	65.000.000	100,00%	65.000.000	100,00%
427	EDAR de Monforte	49.000.000	49.000.000	100,00%	25.973.010	53,01%
428	EDAR emisario submarino Vigo	47.250.000	47.250.000	100,00%	47.250.000	100,00%
429	Colector borde R.Lagares Vigo	39.000.000	39.000.000	100,00%	35.855.357	91,94%
430	Ampliación abast.saneam.Ribadavia	20.000.000	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%
	Saldo de Créditos	19.203.110	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL APLIC. 06.04.412A		1.727.060.983	1.707.817.873	98,89%	941.880.774	54,54%

Cuadro nº 1

EJECUCIÓN POR PROYECTOS DE LA APLICACIÓN 06.04.412A



EJECUCIÓN POR PROYECTOS DE LA APLIC. 06.04.413B



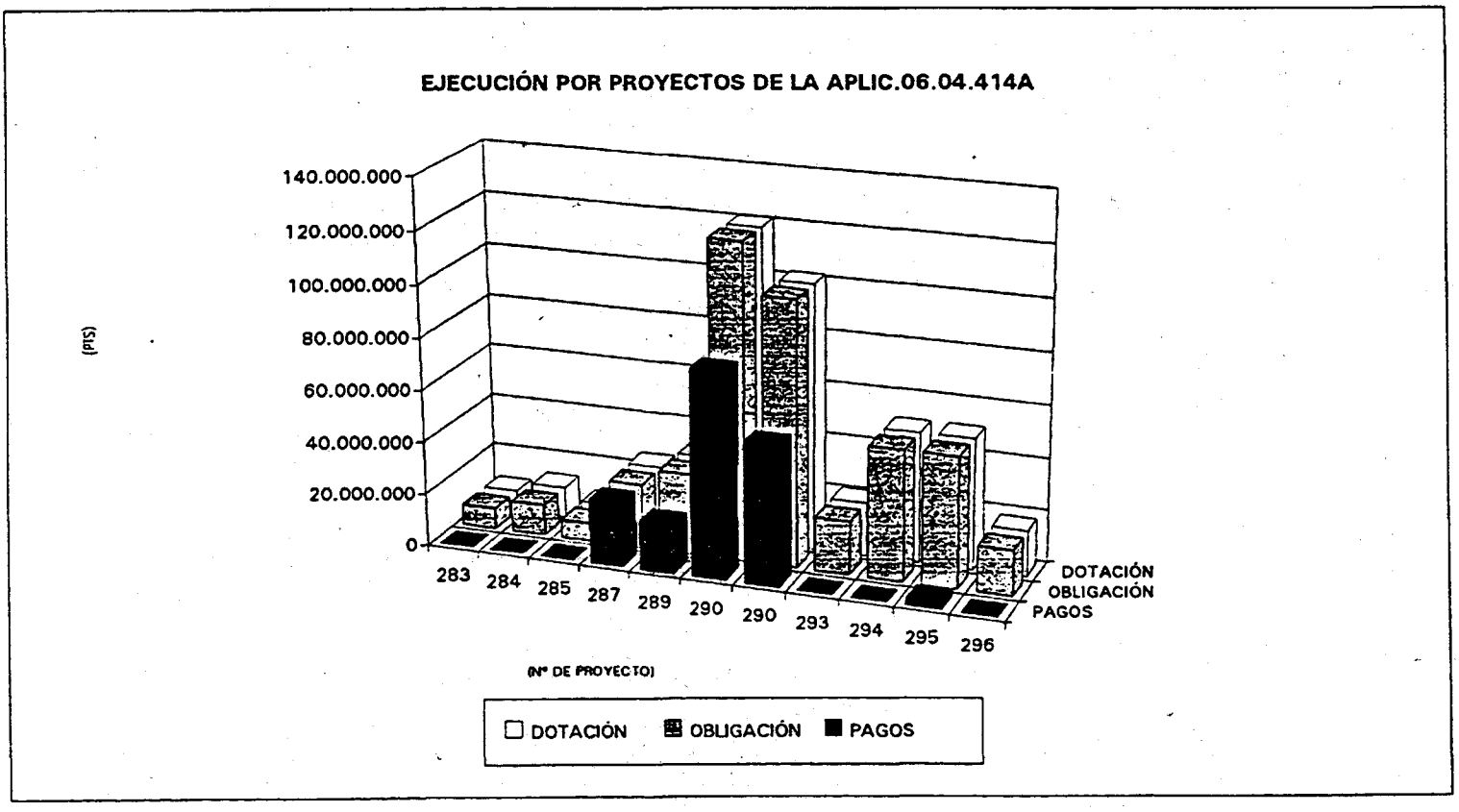
CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS (413B)
DOTACIÓN: 3.472.712.269

Nº DE EXPED.	DENOMINACIÓN PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC./ D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
167	N/AC/87.3 Autopista-Lanza	107.082.214	107.082.214	100,00%	5.872.944	5,48%
168	N/LU/87.4.2 Masmas-Adelán	250.000.000	250.000.000	100,00%	243.003.928	97,20%
169	N/AC/87.2.2 Curtis-Corredoiras	2.521.920	0	0,00%	0	0,00%
173	N/PO/85.6 Mejora Pontevedra-A Estrada	100.000.000	100.000.000	100,00%	71.755.497	71,76%
174	N/LU/87.6.2. Sarria-Bóveda	213.430.858	213.430.858	100,00%	204.696.867	95,91%
175	N/OUR/85.4.1 Viana do B.-Cambela	280.000.000	222.841.914	79,59%	70.993.056	25,35%
177	N/LU/85.2.2. Escairón-Ponte Rio Miño	159.980.000	150.000.000	93,76%	115.189.556	72,00%
178	N/LU/89.4 Chantada-Alto do Faro	9.999.000	9.999.000	100,00%	0	0,00%
179	N/PO/89.12 Alto do Faro-Lalín	7.849.280	7.849.280	100,00%	7.849.280	100,00%
180	N/OUR/85.6.1 Ribadavia-Leiro	201.366.830	201.366.830	100,00%	141.498.710	70,27%
181	N/OUR/85.6.3 Leiro-Carbaliño	34.410.993	34.410.993	100,00%	2.424.829	7,05%
183	N/LU/87.5. Rábade-Vilalba	4.944.499	4.944.499	100,00%	4.944.499	100,00%
184	N/PO/83.5.2 Oia-A Guarda	200.000.000	200.000.000	100,00%	156.191.713	78,10%
185	N/AC/87.1.1 Muros-Carnota	150.000.000	150.000.000	100,00%	5.524.054	3,68%
186	N/AC/87.1.2 Carnota-Ezaro	22.100.157	22.100.157	100,00%	0	0,00%
187	N/AC/85.3.1 Baio-Vimianzo	254.790.846	254.790.846	100,00%	92.437.121	36,28%
188	N/AC/85.3.2 Vimianzo-Berdeogas	104.050.502	104.050.502	100,00%	33.384.902	32,09%
190	N/AC/85.1 Nuevo acceso a Rianxo	360.623.022	355.876.488	98,68%	338.571.741	93,89%
193	N/PO/87.3. Bueu-Cangas	200.000.000	160.917.797	80,46%	123.466.739	61,73%
194	N/AC/84.2.2 Valdoviño-Cedeira	8.843.353	8.843.353	100,00%	8.843.353	100,00%
195	N/OUR/83.1.0 Ourense-Bentraces	168.158.125	168.158.125	100,00%	168.158.125	100,00%
196	N/AC/87.2.1 Oza-Curtis	361.726.526	361.726.526	100,00%	360.826.986	99,75%
197	N/LU/85.2.3 Puente Miño-Chantada	106.728.573	106.728.573	100,00%	106.728.573	100,00%
198	N/AC/85.2 A Coruña- Baños Arteixo	87.014.484	87.014.484	100,00%	87.014.484	100,00%
199	2/PO/320.3 Ramallosa-Baiona	11.500.000	11.500.000	100,00%	0	0,00%
200	N/AC/88.2 Betanzos-Mesón do Vento	11.890.082	11.890.082	100,00%	11.890.082	100,00%
202	N/OUR/83.8.1 Esgos-Alto do Rodicio	19.124.770	19.124.770	100,00%	19.124.770	100,00%
203	N/PO/84.2.1 Vincios-Porriño	30.449.183	25.670.426	84,31%	19.554.552	64,22%
	N/PO/88.1 Ramallosa-Baiona	3.842.200	3.842.200	100,00%	3.842.200	100,00%
	Saldos de créditos	284.852	0	0,00%	0	0,00%
		0	0	0,00%		0,00%
TOTAL APLIC.06.04.413B		3.472.712.269	3.354.159.917	96,59%	2.403.788.561	69,22%

Cuadro nº 2

CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA (414A)
DOTACIÓN: 443.000.000

Nº DE EXPED.	DENOMINACIÓN PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC./ D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
283	Dársena en Ribadeo	8.048.456	8.048.456	100,00%	0	0,00%
284	Mejora muelle Mirasol	11.788.027	11.788.027	100,00%	0	0,00%
285	Dragado y creación explanada Cilleiro	7.072.296	7.072.296	100,00%	0	0,00%
287	Prolong. dique-muelle Puerto Burela	24.754.001	24.754.001	100,00%	24.754.001	100,00%
289	Acondicionamiento Puerto y Ría de Foz	30.950.000	30.950.000	100,00%	18.706.548	60,44%
290	Mejora y ampliac. atraques en Cariño	120.800.000	120.800.000	100,00%	78.383.161	64,89%
290	Ampliación del puerto de Camariñas	101.587.220	101.587.220	100,00%	53.287.660	52,46%
293	Obras de atraque de Laxe	20.500.000	20.500.000	100,00%	0	0,00%
294	Obras de abrigo en A Guarda	50.000.000	50.000.000	100,00%	0	0,00%
295	Nuevo muelle en el Grove-ampliac.atraque	50.000.000	50.000.000	100,00%	2.757.145	5,51%
296	Ampliación de atraque en Cedeira	17.500.000	17.500.000	100,00%	0	0,00%
TOTAL APLICAC. 06.04.414A		443.000.000	443.000.000	100,00%	177.888.515	40,16%
TOTAL FEDER SECC.6		5.642.773.252	5.504.977.790	97,56%	3.523.557.850	62,44%



Cuadro nº 3

4.1.4.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.(Cuadros nºs. 4 y 5).-

Su dotación representa el 7,4% de las totales del FEDER del 90 de la Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 489.000.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación final fue del 37,42% y el de los pagos del 31,67%.

Se considera una baja ejecución, ya que está 50 puntos por debajo de la media de la Comunidad.

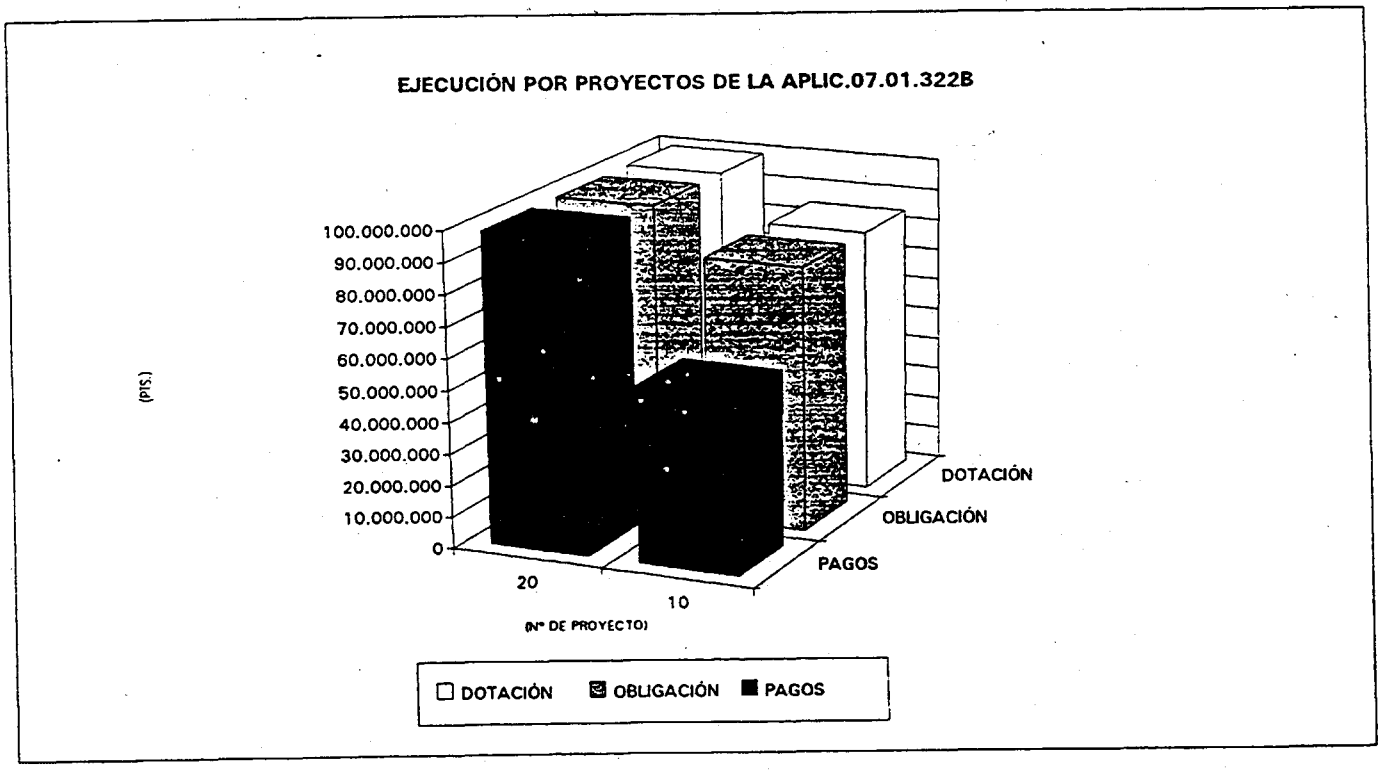
El total de proyectos iniciales fue de 6, coincidiendo en número con los finales, distribuidos en 2 programas.

No se ejecutaron los 4 proyectos de la aplicación 07.01.322C. cuya dotación fue de 306.000.- miles de pesetas, no alcanzando la fase A de autorización.

Los dos proyectos de la aplicación 07.01.322B. por importe de 183.000.- miles de pesetas se ejecutaron en su totalidad.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (07)
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (01)
ENSEÑANZA MEDIA (322B)
DOTACIÓN: 183.000.000

Nº DE EXPED.	DENOMINACIÓN PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC./ D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
10	Módulo imagen y sonido A Coruña	84.000.000	84.000.000	100,00%	55.863.587	66,50%
20	FP 640 p.e. Narón A Coruña	99.000.000	99.000.000	100,00%	99.000.000	100,00%
TOTAL APLICAC. 07.01.322B		183.000.000	183.000.000	100,00%	154.863.587	84,62%

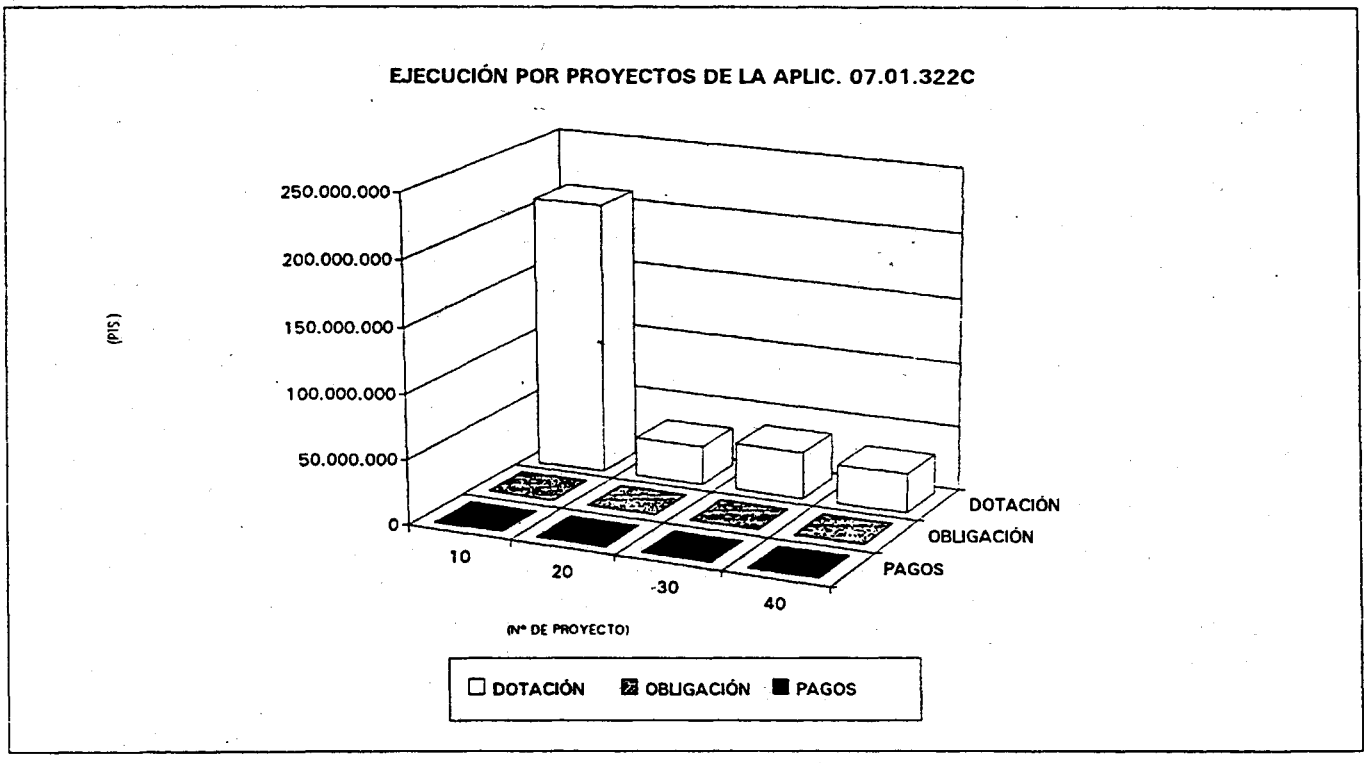


Cuadro nº 4

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (07)
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (01)
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (322C)
DOTACIÓN: 306.000.000

Nº DE EXPED.	DENOMINACIÓN PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC./ D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
10	Escuela ingenieros agrónomos Lugo	210.000.000	0	0,00%	0	0,00%
20	Escuela informática A Coruña	30.000.000	0	0,00%	0	0,00%
30	Escuela Polit. Alimentación Ourense	36.000.000	0	0,00%	0	0,00%
40	Ciencias del mar Vigo	30.000.000	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL APLICAC. 07.01.322C		306.000.000	0	0,00%	0	0,00%

TOTAL FEDER SECC.7	489.000.000	183.000.000	37,42%	154.863.587	31,67%



Cuadro nº 5

4.1.5.- Consellería de Industria y Comercio.-

Esta Consellería sólo cuenta con una aplicación presupuestaria correspondiente a transferencias de capital, la 08.02.711D.770, la cual contaba con una dotación inicial de 60.000.- miles de pesetas, dotación que fue disminuida por una transferencia negativa por importe de 8.256.- miles de pesetas con destino a la aplicación 05.07.531B.607.10, por lo que la dotación definitiva ascendió a 51.744.- miles de pesetas.-

No se reconocieron obligaciones durante el ejercicio, llegándose únicamente a la fase D de Disposición, en la que se encontraban las mencionadas 51.744.- miles de pesetas a 31-12-90.

4.1.6.- Consellería de Sanidad.(Cuadro nº 6).-

Su dotación representa el 6,3% de las totales del FEDER del 90 de la Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 415.250.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación final fue de 15,15% y el de los pagos del 2,50%, considerándose una muy baja ejecución ya que es inferior en 70 puntos a la media de la Comunidad en obligaciones reconocidas.

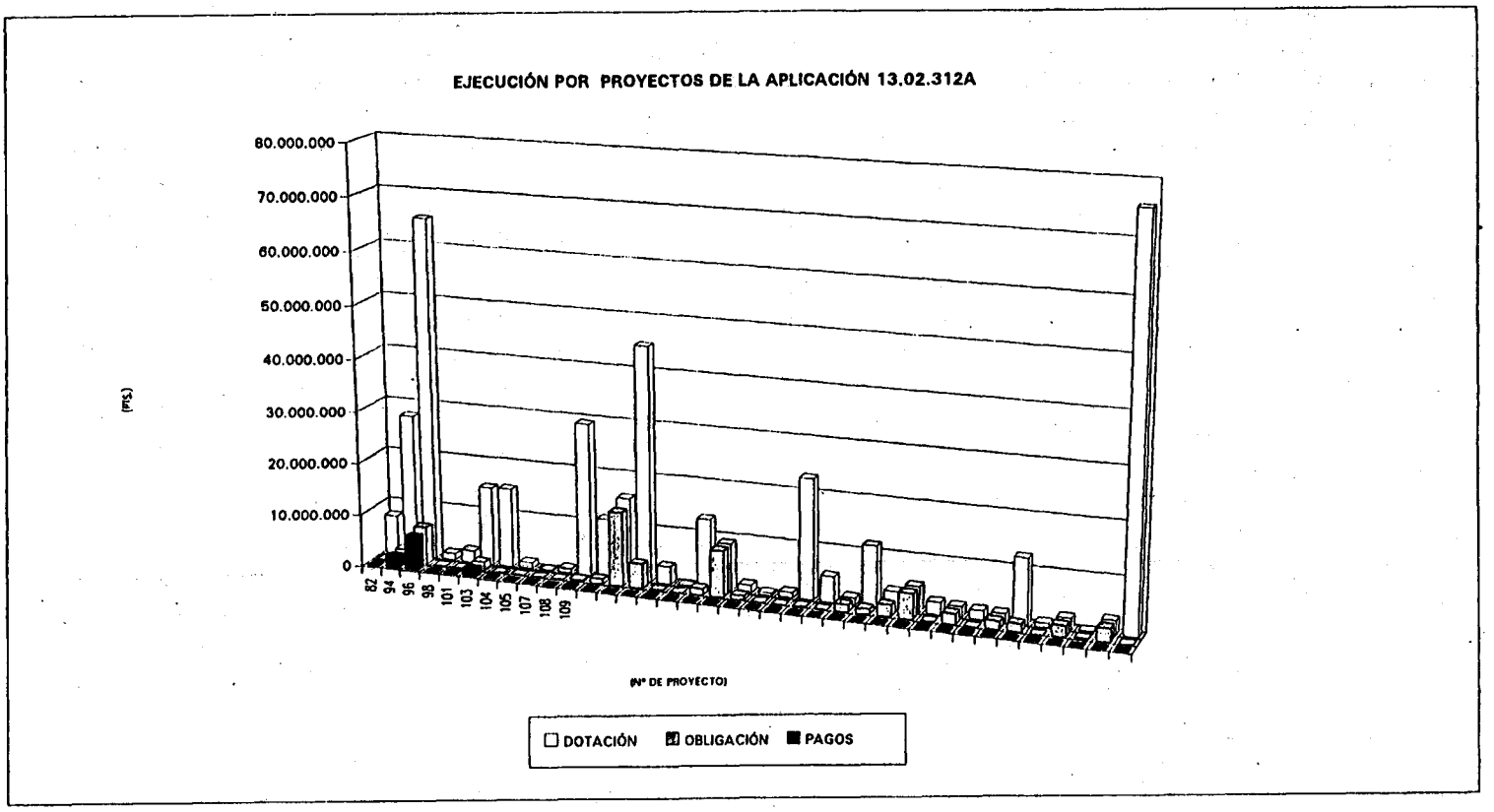
El total de acciones fue de 1, recogida en el programa denominado "Construcción y equipamiento de Centros de Asistencia Sanitaria", que contiene varios expedientes de construcción de Centros de Salud. En nuestro informe sobre el F.C.I. ya se han puesto de relieve las dificultades que existen en la práctica para ejecutar este programa (cesión de los terrenos por los Ayuntamientos, elaboración del proyecto, etc).

El importe que no alcanzó la fase de Autorización-A (saldo de presupuesto), ascendió a 75.553.- miles de pesetas, que representa el 18,19% de la dotación total.

CONSELLERÍA DE SANIDAD (13)
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (02)
ASISTENCIA SANITARIA (312A)
DOTACIÓN: 415.250.000

Nº DE EXPED.	DENOMINACIÓN PROYECTO	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL.REC./ D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
82	Centro Hospitalario Toén	7.500.000	0	0,00%	0	0,00%
94	Obras Constr. Centro salud Muxia	27.492.430	2.492.430	9,07%	2.243.974	8,16%
96	Obras Constr. Centro Sada	65.043.385	7.193.385	11,06%	6.496.243	9,99%
98	Hon. Direcc. Obra Centro S. Barreiros	1.179.850	0	0,00%	0	0,00%
101	Honor. Dirección Centro Baltar	2.145.259	0	0,00%	0	0,00%
103	Constr. Centro Irixo	14.940.719	1.656.941	11,09%	1.497.742	10,02%
104	Reformado obras centro Maside	15.021.590	0	0,00%	0	0,00%
105	Honor. Direcc. Obra Centro A Veiga	1.182.930	0	0,00%	0	0,00%
107	Hon. Compl. Redac. C. Estrada oca	179.200	0	0,00%	0	0,00%
108	Honor. Redacc. Obra C. Pontecesures	865.916	79.915	9,23%	24.985	2,89%
109	Constr. Centro Chapela	29.115.003	365.003	1,25%	0	0,00%
	Obra constr. Consultorio Guisamo	11.278.533	978.533	8,68%	0	0,00%
	Ref. Proy. Centro Ramirás	15.591.080	14.177.522	90,93%	0	0,00%
	Constr. Centro Vilanova de Arousa	44.753.316	4.753.316	10,62%	0	0,00%
	Obras centro Meaño-Dena.	3323943	174251	5,24%	0	0,00%
	Hon. Direcc. Centro Louxame	76.551	29.650	38,73%	0	0,00%
	Constr. Centro Salud Leiro	13.180.508	1.295.615	9,83%	0	0,00%
	Reformado Obras C. Culleredo	8.979.599	8.861.928	98,69%	0	0,00%
	Centro Castrelo do Val	1.498.503	842.107	56,20%	0	0,00%
	Hon. Direcc. Centro Castro-Carballedo	454.608	0	0,00%	0	0,00%
	Hon. Direcc. obra Centro San Sadurniño	1.083.432	0	0,00%	0	0,00%
	Contr. Centro Salud Avión	22.886.068	162.384	0,71%	0	0,00%
	Obras Higiene Centro Becerrea	4.864.743	0	0,00%	0	0,00%
	Liquid. Provis. Centro Meis	1.420.769	1.420.769	100,00%	0	0,00%
	Constr. Centro Salud Vilamartín	11.492.691	1.042.691	9,07%	0	0,00%
	Liq. Prov. Obra C. Salud Cambre	3.419.531	2.249.951	65,80%	0	0,00%
	Liqu. Prov. Obra Constr. Centro Lobios	4.874.951	4.874.951	100,00%	0	0,00%
	Liquid. Prov.Centro Teixeira	2.329.578	72.492	3,11%	72.492	3,11%
	Liq. prov.C.Chandrexa de Queixa	2.038.670	2.038.670	100,00%	31.183	1,53%
	Hon. Dir. Liq. Prov. C. A. P. ESpc.Vigo	1.703.261	0	0,00%	0	0,00%
	Liqu. Obra C. Sarria-Oural	1.597.481	1.544.061	96,66%	0	0,00%
	Obra Constr. Centro Laxe	12.357.373	1.557.373	12,60%	0	0,00%
	Hon. Direcc.Centro San Xoan Rio	761.800	0	0,00%	0	0,00%
	Obra Liq. C. Salud Sandias	2.193.582	2.157.639	98,36%	0	0,00%
	Rev. Precios obra Vilar de Santos	250.928	250.928	100,00%	0	0,00%
	50% Obra Art. Centro Salud con destino	2.619.162	2.619.162	100,00%	0	0,00%
	Saldo de créditos	75.553.057	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL APLICAC. 13.02.312A		415.250.000	62.891.667	15,15%	10.366.619	2,50%
TOTAL FEDER SECC. 13		415.250.000	62.891.667	15,15%	10.366.619	2,50%
TOTAL FEDER (C.VI.)		*6.547.023.252*	*5.750.869.457*	87,84%	*3.688.788.056*	56,34%

Cuadro nº 6



4.1.7.- Resumen general del grado de ejecución.(Cuadro nº 7).-

La dotación final del FEDER del 90 ascendió a 6.598.767.- miles de pesetas habiéndose reconocido obligaciones por importes de 5.750.869. miles de pesetas.- que representa el 87,15% de la dotación, y habiéndose realizado pagos por 3.688.788.- miles de pesetas que representa el 55,90% de la dotación.

Estos datos implican que para el ejercicio 1991 se van a incorporar remanentes de créditos de ejercicios anteriores por importe total de 847.898.- miles de pesetas de acuerdo con el siguiente detalle:

Miles de Pesetas

	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTE	%
FEDER - 90	6.598.767	5.750.869	847.898	12,84
TOTAL	6.598.767	5.750.869	847.898	12,84

El saldo de obligaciones reconocidas más las propuestas de pago pendientes de ordenar a 31-12-90 ascienden a 2.062.081.- miles de pesetas. La cantidad pendiente de pago a 31-12-90 es muy elevada en comparación con las obligaciones reconocidas (35,85%). Debieron de materializarse más pagos, ya que en FEDER hubo un superávit de caja de 2.954.119.- miles de pesetas (apartado 4.3. de este informe).

El resumen de obligaciones reconocidas, pagos y pendientes de pagos al 31-12-90 se muestra en el siguiente cuadro:

Miles de Pesetas

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGADO	PENDIENTES DE PAGO	%
FEDER - 90	5.750.869	3.688.788	2.062.081	35,85
TOTAL	5.750.869	3.688.788	2.062.081	35,85

Las cantidades pendientes de pago a 31-12-90 alcanzan el 35,85% sobre obligaciones reconocidas, lo que se debe fundamentalmente a que las Consellerías emiten documentos O y OK en mayor número en el mes de diciembre que en cualquiera otro mes del ejercicio, y además la Orden del 9 de noviembre de 1990 de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio de 1990 en relación con la contabilidad de gastos públicos (D.O.G. número 227, lunes, de 19 de noviembre de 1990), establece que el último día del ejercicio de 1990 en el que se podrán satisfacer libramientos de pago por la Tesorería, será el día 28 de diciembre, y los documentos contables de fase A, D, y O, tienen como fecha límite de entrada en las oficinas contables de las Intervenciones Delegadas, correspondientes a cada centro gestor, el día 28 de diciembre. Para los documentos de fase OK la fecha límite de entrada en las citadas oficinas será el 17 de diciembre.

En virtud de lo expuesto, a 31 de diciembre siempre existen cuantías importantes en saldos de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el pago y propuestas de pago pendientes de ordenar.

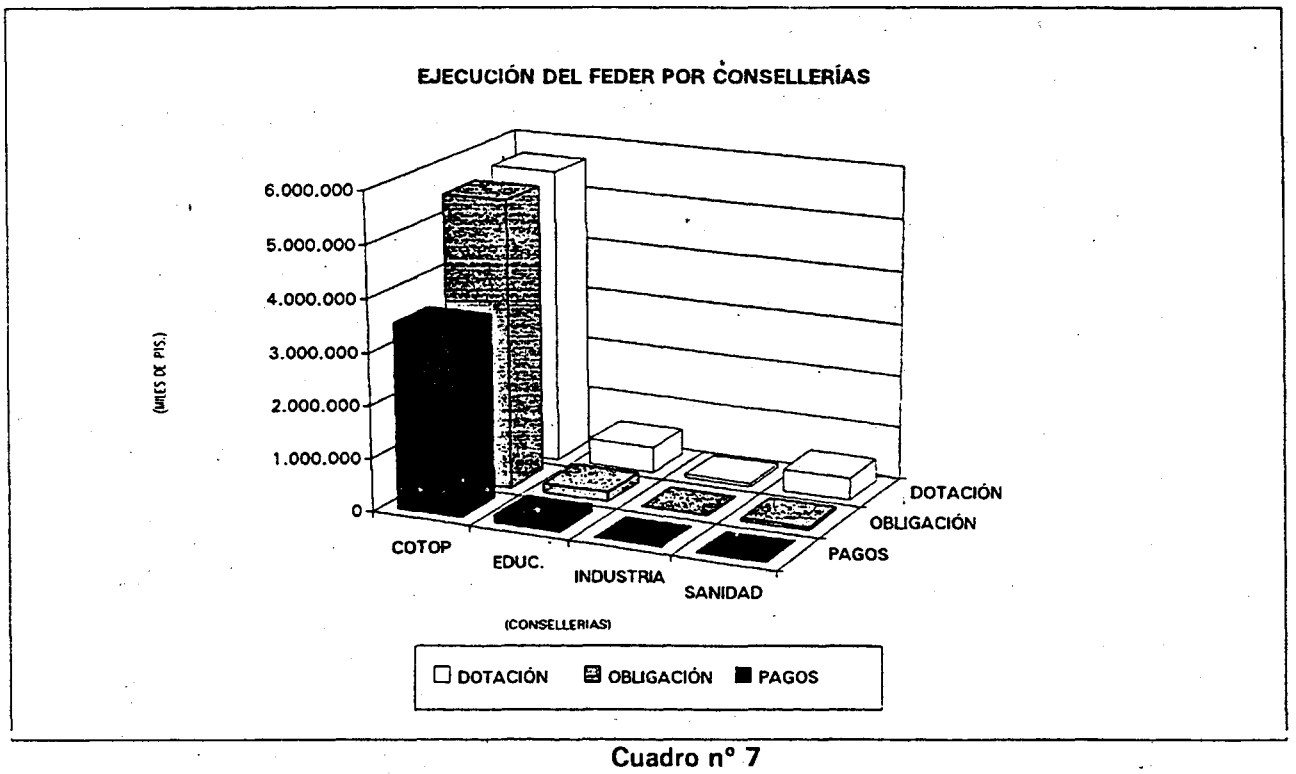
Se recomienda que en lo sucesivo se trate de ordenar pagos a finales de ejercicio, siempre y cuando las disponibilidades lo permitan, cuando existan órdenes de pago pendientes de materializar con superávit de caja, ya que como el F.C.I. tuvo déficit de caja, lo que se produjo fue una compensación de la financiación condicionada entre F.C.I. y FEDER.

Para sucesivos ejercicios, se recomienda que, independientemente del principio de Unidad de Caja, se aceleren al máximo los pagos por FEDER cuando tengan Tesorería sobrante, y se trate de evitar la compensación de financiación entre ambos fondos (F.C.I. y FEDER), agilizando la recaudación por F.C.I. (véase el apartado 4.2.1.).

CUADRO DEL FEDER POR APLICACIONES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL. REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
CAPÍTULO VI					
TOTAL APLIC. 06.04.412A	1.727.060.983	1.707.817.873	98,89%	941.880.774	54,54%
TOTAL APLICAC. 06.04.413B	3.472.712.269	3.354.159.917	96,59%	2.403.788.561	69,22%
TOTAL APLICAC. 06.04.414A	443.000.000	443.000.000	100,00%	177.888.515	40,16%
TOTAL FEDER SECC.06	5.642.773.252	5.504.977.790	97,56%	3.523.557.850	62,44%
TOTAL APLICAC. 07.01.322B	183.000.000	183.000.000	100,00%	154.863.587	84,62%
TOTAL APLICAC. 07.01.322C	306.000.000	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL FEDER SECC.07	489.000.000	183.000.000	37,42%	154.863.587	31,67%
TOTAL APLICAC. 13.02.312A	415.250.000	62.891.667	15,15%	10.366.619	2,50%
TOTAL FEDER SECC. 13	415.250.000	62.891.667	15,15%	10.366.619	2,50%
TOTAL CAPÍTULO VI	6.547.023.252	5.750.869.457	87,84%	3.688.788.056	56,34%
CAPÍTULO VII					
TOTAL APLICAC. 08.02.711D	51.744.054	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL FEDER SECC. 08	51.744.054	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO VII	51.744.054	0	0,00%	0	0,00%

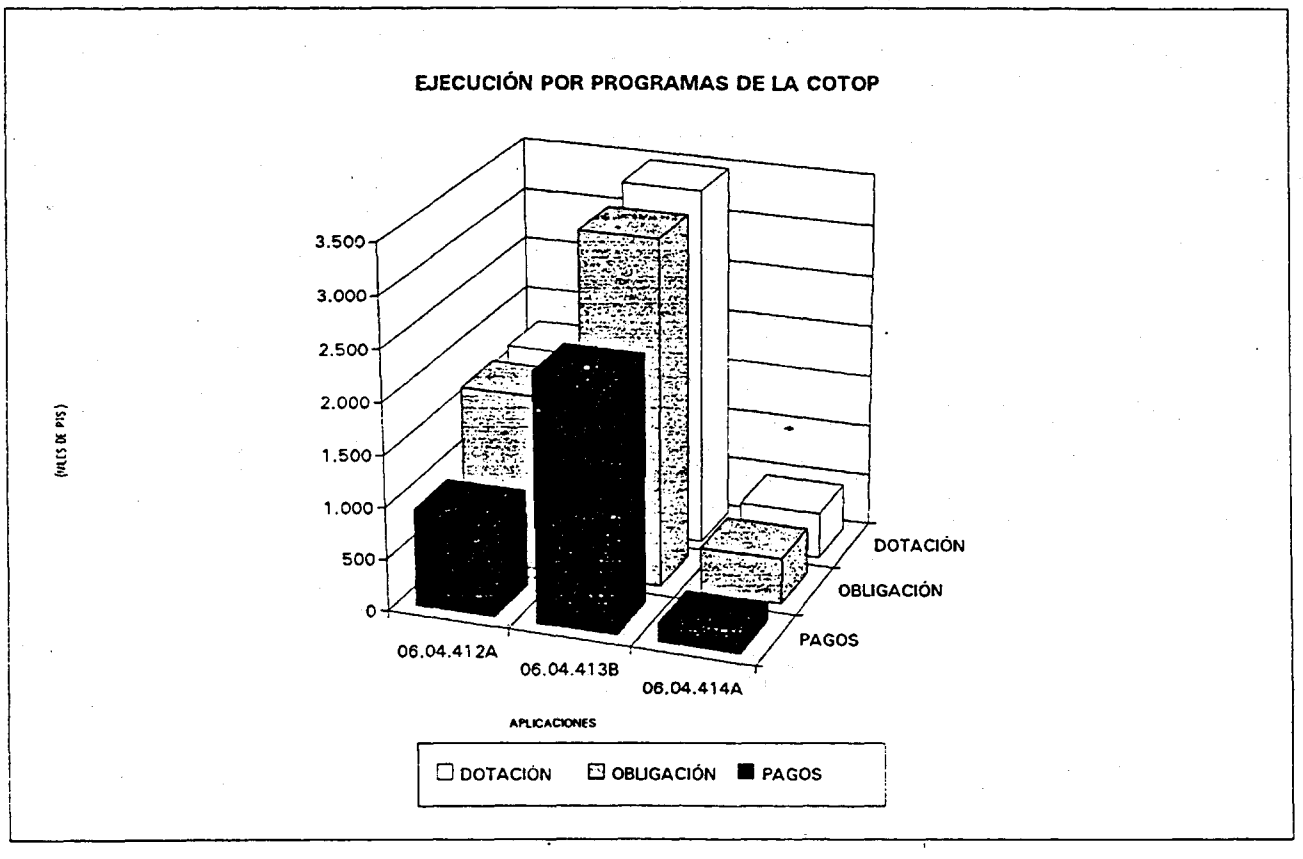
TOTAL FEDER	6.598.767.306	5.750.869.457	87,15%	3.688.788.056	55,90%



Cuadro nº 7

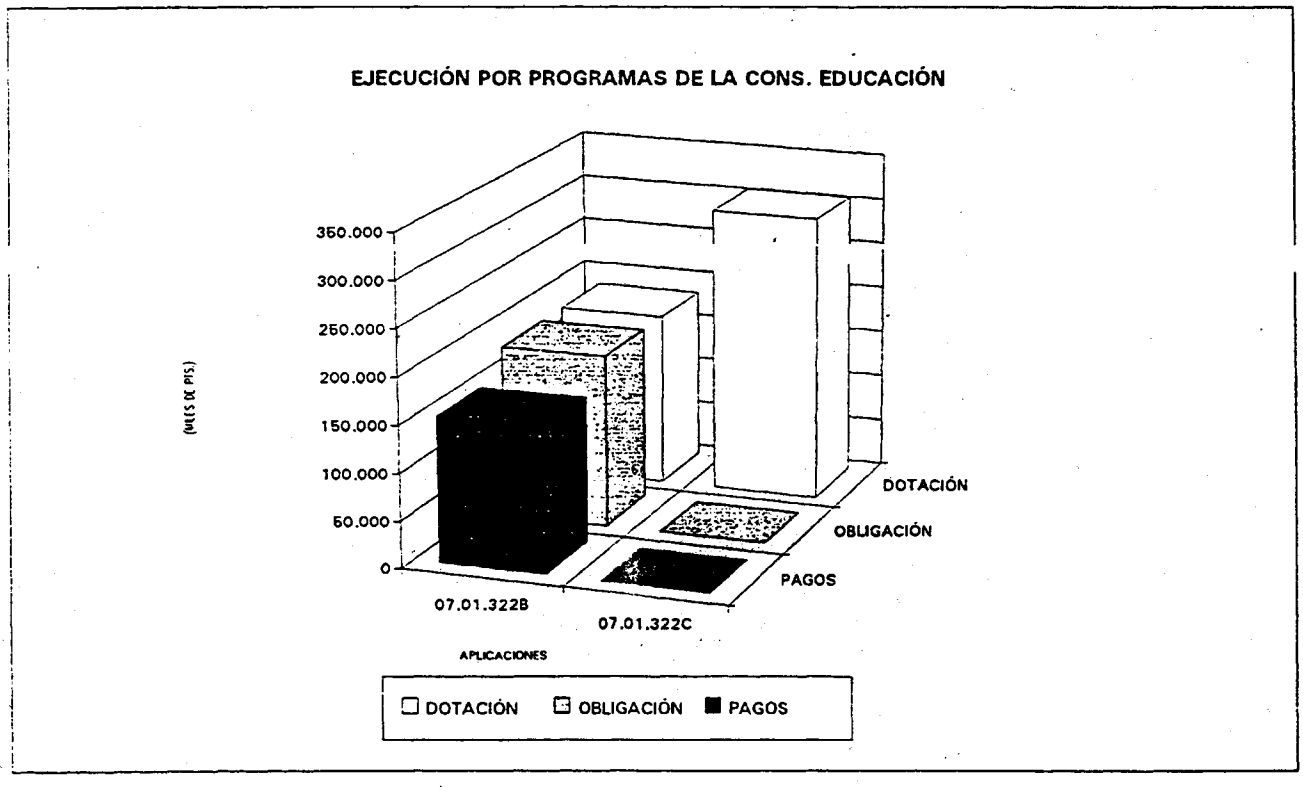
CONSELLERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL. REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
TOTAL APLIC. 06.04.412A	1.727.060.983	1.707.817.873	98,89%	941.880.774	54,54%
TOTAL APLICAC. 06.04.413B	3.472.712.269	3.354.159.917	96,59%	2.403.788.561	69,22%
TOTAL APLICAC. 06.04.414A	443.000.000	443.000.000	100,00%	177.888.515	40,16%
TOTAL FEDER SECC.06	5.642.773.252	5.504.977.790	97,56%	3.523.557.850	62,44%



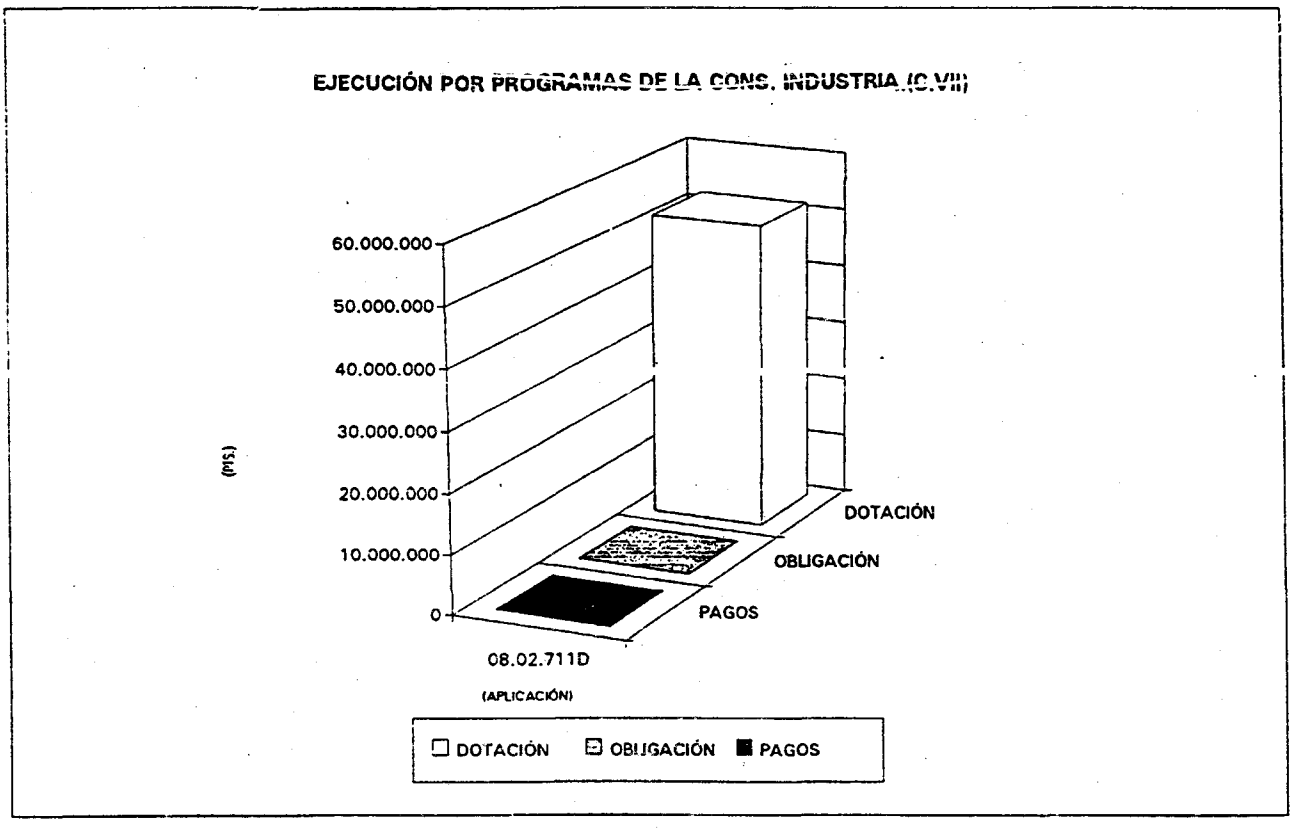
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

APLIC. PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL. REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
TOTAL APLICAC. 07.01.322B	183.000.000	183.000,000	100,00%	154.863.587	84,62%
TOTAL APLICAC. 07.01.322C	306.000.000	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL FEDER SECC.07	489.000.000	183.000.000	37,42%	154.863.587	31,67%



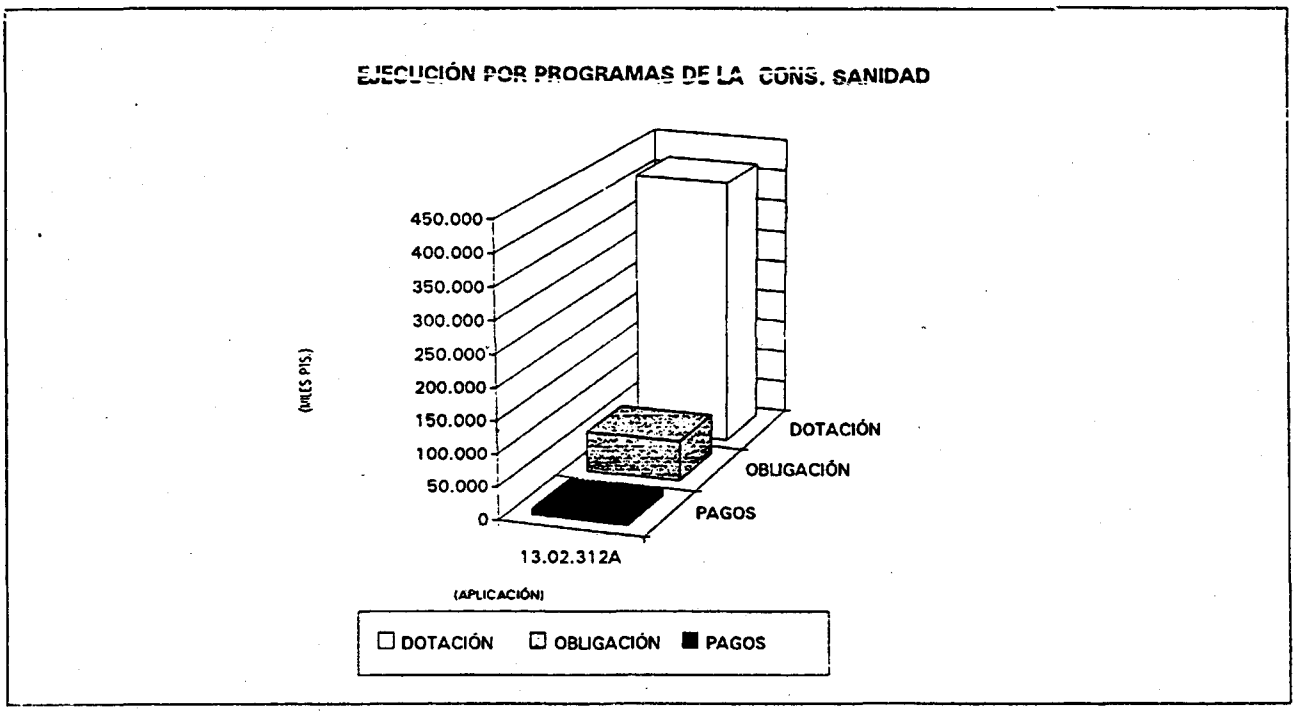
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

APLIC. PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL. REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
TOTAL APLICAC. 08.02.711D	51.744.054	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL FEDER SECC. 08	51.744.054	0	0,00%	0	0,00%



CONSELLERÍA DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBL. REC. / D.FINAL	PAGOS	PAGOS/ D.FINAL
TOTAL APLICAC. 13.02.312A	415.250.000	62.891.667	15,15%	10.366.619	2,50%
TOTAL FEDER SECC.13	415.250.000	62.891.667	15,15%	10.366.619	2,50%



4.1.8.- Conclusiones.-

La dotación inicial del FEDER fue de 6.607.023 miles de pesetas y la dotación final de 6.598.767 miles de pesetas, debido a que se realizó una transferencia negativa de 8.256 miles de pesetas, disminuyendo la aplicación de FEDER 08.02.711D. con destino a aumentar crédito en la aplicación 05.07.531B.607.10.

Como resumen del análisis y evaluación del grado de ejecución por la Comunidad Autónoma de Galicia de los proyectos financiados con las dotaciones del ejercicio 1990 en concepto de FEDER, se deberá resaltar que las obligaciones reconocidas sobre la dotación final del FEDER dotado en 1990 representó el 87,15% y los pagos el 55,90%, lo que se considera una ejecución muy aceptable, casi excelente.

Miles de Pesetas

FEDER 1990	DOTACIÓN FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ DOTACIÓN FINAL	PAGADO	PAGADO/ DOTACIÓN FINAL
Capítulo VI	6.547.023	5.750.869	87,84%	3.688.784	56,34%
Capítulo VII	51.744	—	—	—	—
TOTAL	6.598.767	5.750.869	87,15%	3.688.784	55,90%

El remanente a 31-12-90 ascendió a 847.898 miles de pesetas, representando el 12,84% de la dotación final.

4.2.- Percepción de las dotaciones del FEDER.-

La percepción de las dotaciones está contemplada en el artículo 21 del Reglamento (CEE) nº 4.253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 que establece que:

"1.- El pago de las ayudas financieras se efectuará de conformidad con los compromisos presupuestarios y se hará llegar a la autoridad designada al efecto en la solicitud presentada por el Estado Miembro correspondiente. Podrá adoptar bien la forma de anticipo, bien la de pago definitivo, referido a gastos efectivos realizados. Para las acciones de una duración igual o superior a dos años, los pagos se referirán a los tramos anuales de los compromisos contemplados en el apartado 2 del artículo 20.

2.- El anticipo abonado por cada uno de los compromisos podrá alcanzar el 50% de la cantidad comprometida, habida cuenta de la naturaleza de la acción de que se trate.

3.- Un segundo anticipo, calculado de forma que la cuantía acumulada de los dos anticipos no exceda del 80% del compromiso, se abonará cuando el organismo responsable haya certificado que por lo menos la mitad del primer anticipo ha sido utilizada y que la acción avanza a un ritmo satisfactorio y de conformidad con los objetivos previstos.

4.- El pago definitivo del saldo de cada uno de los compromisos se efectuará si:

- La autoridad designada que se menciona en el apartado 1) presenta a la Comisión una solicitud de pago dentro de los 6 meses siguientes al final del año de que se trate o a la terminación material de la acción;

- Se presentan a la Comisión los informes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 25;

- El Estado Miembro envía a la Comisión un certificado en el que se confirmen los datos facilitados en la solicitud de pago y los informes.

5.- Los Estados Miembros designarán a las autoridades facultadas para expedir los certificados a que se refieren los apartados 3 y 4, y procurarán que los beneficiarios reciban los anticipos y los pagos en el más breve plazo.

6.- En cuanto a las medidas destinadas a sostener la renta agrícola, tales como la compensación de los obstáculos naturales en las zonas desfavorecidas o de montaña, reguladas por las disposiciones del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento (CEE) nº 2.052/88, las condiciones y modalidades de los anticipos o de los pagos finales se determinarán en las correspondientes Decisiones de la Comisión, según la naturaleza específica de las medidas.

7.- En cuanto a los estudios y medidas innovadoras la Comisión determinará los procedimientos de pago adecuados".

4.2.1.- Petición de fondos a la Administración Central.-

Este Consello solicitó de la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma) la relación de peticiones de fondos efectuada a la Administración Central durante 1990 correspondiente al FEDER, comunicándonos que las cantidades solicitadas fueron las siguientes:

miles de pesetas

FEDER	IMPORTES SOLICITADOS
1988	497.753.-
1989	1.289.343.-
TOTAL	1.787.096.-

Lo recaudado por FEDER en 1990 ascendió a 6.642.907.- miles de pesetas según se pone de manifiesto en el apartado 4.2.2.

La Xunta de Galicia recibió del FEDER más del importe que adjudicó en 1990, ya que las disposiciones de fase D ascendieron a 6.124.902.- miles de pesetas y las obligaciones reconocidas ascendieron a 5.750.869.- miles de pesetas y la recaudación a 6.642.907.- miles de pesetas, lo que provocó el superávit de Tesorería, debido a que la financiación del FEDER resulta muy beneficiosa para la Comunidad Autónoma (artículo 21 del Reglamento (CEE) nº 4.253/88).

La recaudación del FEDER fue superior a la dotación final del Presupuesto de Gastos en 44.140.- miles de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Dotación Final.....	6.598.767.-
Recaudado.....	6.642.907.-
Exceso.....	44.140.-

La financiación condicionada del F.C.I. y FEDER influyó de forma opuesta en la Tesorería de la Comunidad a 31-12-90, ya que de hecho se produjo en el ejercicio 1990 un superávit de caja en el FEDER y un déficit de caja en el F.C.I. , debido a la distinta forma de financiación de ambos Fondos, ya que el FEDER se financió desde el momento de la adjudicación (Compromiso) con un 50% de adelanto y el F.C.I. de forma trimestral después del pago.

A pesar de lo que determina el artículo 11 de la Ley 3/1984 del 3 de abril, de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia, bajo el punto de vista operativo de la Unidad de Caja, la Comunidad evitó parte del déficit de caja por el superávit del FEDER (apartado 4.3.), por lo que es conveniente que la Administración Central reponga con prontitud el F.C.I. para no distorsionar la Tesorería de la Comunidad Autónoma Gallega.

Por otra parte se podría adaptar la financiación condicionada a su finalidad, siempre y cuando la Administración Central reponga con prontitud el F.C.I.

4.2.2.- Ingresos del FEDER en el ejercicio 1990.-

La Liquidación del Estado de Ingresos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma en el ejercicio 1990, en lo que respecta a los ingresos por el FEDER, fue preparado por este Consello de Contas a partir del Libro Mayor de Ingresos de la Intervención Delegada de la Consellería de Economía y Hacienda y la Liquidación Presupuestaria de 1990:

FEDER. - 1990

Liquidación Presupuestaria (miles de pesetas)

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS LÍQUIDOS	RECAUDADO (INGRESOS LÍQUIDOS)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 31-12-90
790 - del Exterior. Provenientes de la CEE. FEDER.	10.236.770	10.236.770	6.648.590	6.648.590	—
SUMAS TOTAL	10.236.770	10.236.770	6.648.590	6.648.590	—

Del total de ingresos del concepto 790.- se detectaron dos partidas que son del F.S.E. por importes de pts. 4.438.863 y 1.243.738.- abonadas por el Banco de España, respectivamente, con fechas 20-4-90 y 23-4-90, por lo que realmente corresponden al FEDER las siguientes cantidades:

(miles de pesetas)

- Derechos reconocidos líquidos..... 6.642.907.-
- Recaudado..... 6.642.907.-

En el concepto 790.- se contabilizaron conjuntamente FEDER y F.S.E.

La diferencia en menos sobre las previsiones definitivas y los derechos reconocidos ascendieron a 10.236.770-6.648.590=3.588.180 miles de pesetas.

Los derechos pendientes de cobro a 31-12-90 tienen saldo 0.-

El importe recaudado sobre los pagos realizados fue del 180% (6.648.590:3.688.788 por 100)

Los importes contabilizados por la Administración Autonómica fueron los siguientes:

RECAUDACIÓN EJERCICIO 1.990 - FEDER

FECHA ABONO	IMPORTE
B. ESPAÑA	B. ESPAÑA
29/12/89	10.178.500
15/1/90	122.414.401
13/2/90	317.285.000
21/3/90	1.357.551.035
21/3/90	637.860.000
29/3/90	61.943.500
7/5/90	167.680.000
15/6/90	219.385.000
22/6/90	40.156.500
22/6/90	1.006.878.290
22/6/90	184.805.351
4/7/90	282.465.000
31/7/90	202.870.000
29/8/90	2.022.277.435
1/10/90	9.157.037
TOTAL F.E.D.E.R.	6.642.907.049
20/4/90	4.438.863
23/4/90	1.243.738
TOTAL F.S.E.	5.682.601
TOTAL GENERAL 790	6.648.589.650

4.3.- Resultado del FEDER en el ejercicio económico 1990. (Superávit de Gestión y de Caja).

El artículo 92, apartado 6°, de la Ley 3/1984, del 3 de abril de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia, establece que:

"El resultado del ejercicio económico, de acuerdo con la estructura siguiente:

a) Los saldos de ejecución del presupuesto por obligaciones y derechos reconocidos y por pagos e ingresos realizados.

b) El déficit o superávit de Tesorería por operaciones presupuestarias, incluyendo las correspondientes al ejercicio vigente y a los anteriores".

Ejecución del Presupuesto del FEDER 1990.-

(miles de pesetas)

Derechos reconocidos 6.642.907.-
Obligaciones reconocidas..... 5.750.869.-

Superávit de gestión..... 892.038.-

==========

Ingresos 6.642.907.-

Pagos 3.688.788.-

Superávit de Caja..... 2.954.119.-

==========

El superávit de gestión del FEDER en el ejercicio 1990 fue de 892,038 millones de pesetas y el superávit de caja de 2.954,119 millones de pesetas.

Respecto a la comparación entre la dotación final del Presupuesto de Gastos y el Presupuesto definitivo de Ingresos, este último superó al primero en 3.638.003 miles de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

(miles de pesetas)

-Presupuesto de Gastos-Dotación Final..... 6.598.767
-Presupuesto Definitivo-Ingresos..... 10.236.770

Diferencia..... -3.638.003

5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.-

Se realizó una verificación y evaluación del grado de cumplimiento de la legalidad de la contratación administrativa de los proyectos financiados con el FEDER, de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, Decreto 395/1990 del 14 de junio sobre contratación directa de obras y suministros de la Xunta de Galicia (D.O.G.nº 148, del 30 de julio de 1990), analizando fundamentalmente los mismos apartados que en el F.C.I., ya que la auditoría, en la contratación administrativa se hizo de forma conjunta para el F.C.I. y FEDER.

La muestra elegida comprendió el 57,14% de las aplicaciones presupuestarias a nivel de subconcepto, con un volumen económico de los proyectos de inversión del 91,80% sobre el total de créditos definitivos de 6.598.767.- miles de pesetas.

Esta muestra consta de 52 contratos con un volumen económico total de 12.749.307.- miles de pesetas, importe superior a los créditos definitivos del FEDER al tratarse de contratos en los que existe cofinanciación con el F.C.I. y fondos propios de la Comunidad Autónoma.

En el cuadro CA-1 se muestra el número de contratos, tipo de contratos e importe por Consellerías y en el cuadro CA-2 se muestra el número de contratos, forma de adjudicación e importe por Consellerías.

Los contratos de Obras son los más característicos de la muestra seleccionada, representando el 79% de los contratos y el 99,84% del importe total de la muestra. Respecto de la forma de adjudicación, el 86% se realizó por Concurso, el 6% por Subasta y el 8% por Adjudicación Directa.

Como se observa, el sistema de contratación más empleado fue el de Concurso y, aunque la Ley 4/1990 del 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, en su artículo 14, entre otras modificaciones a la Ley de Contratos, varía el texto de sus artículos 28 y 35, colocando en plan de igualdad los sistemas de Subasta y Concurso para el contrato de Obras, se deberá procurar el uso del Sistema de Subasta, ya que sin incurrir en bajas temerarias, se obtienen condiciones económicas más ventajosas.

La Subasta fue poco empleada por la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, con 5 contratos por importe total de 780 millones, lo que representa el 6,34% del total de la muestra.

La Consellería de Sanidad lo utilizó en un sólo contrato por importe de 25 millones, representando el 56,45% de la muestra.

Se debe señalar, como efecto positivo, que no hubo un exceso de contratación directa, lo cual demuestra que hubo una buena previsión y planificación al no hacer abuso de este sistema de adjudicación y además no fueron observados posibles fraccionamientos de un objeto total en varios contratos parciales. Únicamente las Consellerías de Ordenación del Territorio y Obras Públicas con 13 contratos, por importe total de 1.101 millones y Sanidad con 10 contratos, por importe de 16 millones son las que emplearon este sistema de contratación.

Asimismo se hace constar que en otras áreas el análisis de la contratación administrativa es más detallada, ya que este informe sólo se refiere al FEDER.

CONTRATOS EXAMINADOS - 1.990 FEDER

CONSELLERÍA \ CONTRATO	OBRAS			SUMINISTROS			ASIST. TÉCNICA			TOTALES		
	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%
C. de Ordenación del Territorio y Obras Públicas	35	12.293.332.133	96,57	0	0	0,00	1	2.995.000	23,35	36	12.296.327.133	96,45
C. de Sanidad	6	436.730.693	3,43	3	6.419.937	100,00	7	9.828.867	76,65	16	452.979.497	3,55
TOTAL CONSELLERÍAS	41	12.730.062.826	100,00	3	6.419.937	100,00	8	12.823.867	100,00	52	12.749.306.630	100,00

CA-1

CONTRATOS EXAMINADOS - 1.990 FEDER

CONSELLERÍA \ ADJUDICACIÓN	CONCURSO			SUBASTA			ADJ. DIRECTA			ADMÓN.			TOTALES		
	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%	Nº	IMPORTE	%
C. de Ordenación del Territorio y Obras Pública	18	10.515.173.841	96,23	5	780.287.697	96,93	13	1.000.865.595	98,40	0	0	0	36	12.296.327.133	96,45
C. de Sanidad	5	412.043.056	3,77	1	24.687.637	3,07	10	16.248.804	1,60	0	0	0	16	452.979.497	3,55
TOTAL CONSELLERÍAS	23	10.927.216.897	100,00	6	804.975.334	100,00	23	1.017.114.399	100,00	0	0	0	52	12.749.306.630	100,00

CA-2

5.1.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.-

La muestra elegida fue de 36 contratos, con un volumen económico de 12.296.- millones de pesetas, representando el 96% del importe total de la muestra, de los que 18 contratos se adjudicaron por Concurso, por un importe de 10.515.- millones de pesetas; 5 por Subasta, por un importe de 780 millones y 13 por Adjudicación Directa, por importe de 1.001 millones.

Del total de contratos, 35 corresponden a Obras por importe de 12.293 millones y 1 a Asistencia Técnica por importe de 3 millones de pesetas.

El cumplimiento legal es satisfactorio, habiendo enviado a este Consello toda la documentación solicitada.

5.2.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.-

Debido a que se realizó la muestra conjuntamente entre F.C.I. y FEDER, no resultó elegido ningún expediente de este último.

En el informe del F.C.I. se hizo constar que su cumplimiento legal era satisfactorio habiendo enviado a este Consello toda la documentación solicitada.

5.3.- Consellería de Industria y Comercio.-

Debido a que se realizó la muestra conjuntamente entre F.C.I. y FEDER, no resultó elegido ningún expediente de este último.

En el informe del F.C.I. se hizo constar que su cumplimiento legal era satisfactorio habiendo remitido a este Consello toda la documentación solicitada.

5.4.- Consellería de Sanidad.-

La muestra elegida fue de 16 contratos con un volumen económico de 453 millones de pesetas, representando el 4% del importe total de la muestra, de los que 5 contratos se adjudicaron por Concurso por un importe de 412 millones, 1 por Subasta por importe de 25 millones y 10 por Adjudicación Directa por importe de 16 millones.

Del total de contratos de la muestra, 6 corresponden a Obras, por un importe total de 437 millones, 3 a Suministros por 6 millones y 7 a Asistencia Técnica por importe de 10 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio en todos los expedientes auditados, remitiendo a este Consello toda la documentación solicitada.

5.5.- Recomendaciones a la Contratación Administrativa.-

Este apartado fue analizado en la fiscalización del F.C.I., ya que se realizó de forma conjunta con el FEDER.

6.- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.-

6.1.- Puntos débiles y recomendaciones.-

El segundo objetivo del control realizado por este Consello de Contas fue evaluar el control interno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, en lo que respecta a la coordinación, control y seguimiento del FEDER, con referencia a los objetivos genéricos de eficiencia y eficacia, y a la exigencia que específicamente establece la normativa legal del FEDER en los Reglamentos de la CEE nº 4.254/88 y nº 2.052/88.

Este Consello formula, con objeto de mejorar el control interno, las siguientes recomendaciones:

- Al estar los proyectos del FEDER cofinanciados en su mayor parte con el F.C.I. y obligatoriamente con fondos de la Comunidad Autónoma, se recomienda el mismo control que para el F.C.I., debiéndose implantar la contabilidad financiera, analítica y el subsistema de proyectos de inversión que permita un correcto seguimiento por proyecto de forma individualizada con sus fuentes de financiación (condicionada e incondicionada).

Asimismo, al formalizarse los contratos de obras, deberán especificar los importes por claves de financiación.

- En la contabilización de los ingresos se recomienda que se creen conceptos o subconceptos distintos para cada uno de los Fondos de la CEE (FEDER. FSE, FEOGA-GARANTÍA y FEOGA-ORIENTACIÓN), con el fin de poder identificar en cada momento la situación de la financiación del Presupuesto de Gastos, ya que lo ideal sería llevar a cabo un control financiero singularizado por cada proyecto del FEDER, tanto en la base de pagos como en la de ingresos en los proyectos que tengan financiación condicionada.

- Por parte de las Intervenciones Delegadas de las Consellerías se procederá siempre a la intervención de las certificaciones de obras y minutas de honorarios previamente a la aprobación por el Órgano Competente y a la expedición de los documentos O y OK. Asimismo los Órganos Gestores deberán realizar cuadres mensuales de expedientes con el Mayor de Conceptos Presupuestarios.

- Es conveniente que por parte de la Dirección General de Planificación y Relaciones con la CEE se establezca un cuadre mensual con los pagos materiales del FEDER contabilizados, en coordinación con la Intervención General y la Dirección General de Presupuestos y del Tesoro.

Este Consello realizó una muestra de las órdenes de pago y de los pagos realizados con los cargos bancarios, partiendo de las propuestas de pago expedidas en el ejercicio corriente 1990.

Igualmente se verificaron los ingresos del ejercicio correspondiente al FEDER 1990 mediante comprobaciones de su abono en la cuenta del Banco de España.

6.2.- Ajustes de la Liquidación Presupuestaria.-

Al examinar y verificar la recaudación del concepto 790.- del Exterior, Provenientes de la CEE. FEDER, se observaron dos mandamientos de ingreso contabilizados en el ejercicio 1990 como recaudación del presupuesto corriente de 1990, cuando realmente deberían ser contabilizados como de ejercicios cerrados en derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.

Los citados mandamientos, como mínimo, son los siguientes:

(miles de pesetas)

FECHA BANCO DE ESPAÑA	FECHA MANDAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FECHA MANDAMIENTO COMUNIDAD AUTÓNOMA	IMPORTE
05-01-90	21-12-89	20-02-90	10.179.-
13-02-90	21-12-89	15-02-90	317.285.-
SUMA TOTAL			327.464.-

No se detectó ninguna partida del Presupuesto de Gastos de 1990 que pudiese ser objeto de ajuste, en concepto de FEDER.

7.- OPINIÓN FINAL.-

Se revisó la documentación soporte que contiene el Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios y la Liquidación presupuestaria del FEDER al 31-12-90, empleándose en su examen pruebas de auditoría generalmente aceptadas.

En nuestra opinión, salvo por la salvedad expuesta en el apartado 6.2. de Ajustes, el Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios y la Liquidación de 1990 referida al concepto FEDER presentan adecuadamente la situación presupuestaria y financiera de los gastos de la ejecución de los proyectos y de las percepciones de las dotaciones de su Estado de Ingresos, de conformidad con los principios y criterios correspondientes a la Contabilidad Pública Presupuestaria, a la Ley de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia y demás normativa vigente al 31-12-90.

8.- ALEGACIONES.-

8.1.- Alegaciones de la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma).-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Régimen Interior del Consello de Contas de 2 de junio de 1992 se puso en conocimiento de la Consellería de Economía y Hacienda el resultado de las actuaciones.

Se adjuntan las alegaciones recibidas en respuesta a este trámite (Ver Anexo número V).

Se hace constar que no se ha modificado el anteproyecto al no considerar oportunas este Consello ninguna de las mencionadas alegaciones, cuestión que se amplía en el apartado siguiente de puntualizaciones.

8.2.- Puntualizaciones a las alegaciones formuladas por la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad Autónoma).-

Primera: El Marco Legal del FEDER.-

Se hace constar por la Intervención General que los créditos FEDER consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1990, no corresponden en su totalidad al Programa Operativo de Galicia 1990-1993, sino que una parte de los mismos pertenecen a la anualidad 1990 del FEDER-1988 y FEDER-1989.

El haber considerado este Consello la totalidad de los créditos como del Programa Operativo se debe a que en la información facilitada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma en escrito nº 640 del 30 de abril de 1992 por el que nos enviaron la documentación remitida por la Dirección General de Planificación y Relaciones con la CEE, figura toda como del Programa Operativo.

Segunda: La determinación del Grado de Ejecución.-

A) Generales.-

Se hace constar por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que parece muy subjetivo analizar el grado de ejecución del presupuesto en base únicamente a las obligaciones reconocidas en el ejercicio, máxime cuando se trata de gastos de capital, como es el caso que nos ocupa, sin tener en cuenta otras consideraciones.

Este Consello considera que no es un criterio subjetivo analizar el grado de ejecución del presupuesto en base a las obligaciones reconocidas, sino por el contrario, es un criterio generalmente aceptado por el propio Tribunal de Cuentas del Estado, por lo que se ratifica en su informe.

B) Específicas.-

Se hace constar por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que los grados de ejecución presupuestaria que se analizan en el anteproyecto del informe se establecen únicamente como el resultado de una simple operación aritmética, sin que se ponga de manifiesto en el mismo los motivos que los originan, por lo que, de su lectura se pueden derivar conclusiones erróneas ó hacer depender exclusivamente de ese parámetro la calificación de la gestión realizada.

La citada Intervención General indica los motivos por los que no se ejecutaron cuatro proyectos por importe de 306.- millones de pesetas correspondientes a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, indicando que por pertenecer los mismos al Programa de Enseñanzas Universitarias dependían para su realización de unos trámites ajenos a la Administración Autonómica, como eran la formalización de la cesión de los terrenos, expropiaciones, permutas y otras.

Este Consello es consciente de las dificultades que tiene la gestión en un momento determinado para la ejecución del presupuesto, pero ello no desvirtúa absolutamente en nada el informe de este Consello.

Tercera: Las recomendaciones contenidas en el apartado 4.- "Resumen General del Grado de Ejecución.-

Tal como queda plasmado en los apartados 4.1.3 al 4.1.6 de este informe, este Consello realizó su trabajo verificando la realización del presupuesto en lo relativo a pagos sobre la dotación final por aplicaciones presupuestarias (Consellerías, Servicios, Programas y Clave Económica) y en el apartado 4.1.7. sobre toda la información integrada de la Liquidación, calculando la relación del pagado sobre obligaciones reconocidas, y ambos estudios no obedecen a un cambio de criterio, sino a distintas pruebas de auditoría realizadas por este Consello, para determinar el grado de ejecución y de cumplimiento del Presupuesto.

Cuarta: La Recomendación propuesta en el apartado 5.- "Contratación Administrativa".-

Este Consello se ratifica completamente en su informe.

Quinta: Las Recomendaciones contenidas en el apartado 6.- "Evaluación del Control Interno".-

A) La implantación de la contabilidad financiera y el subsistema de proyectos de inversión.-

Se indica por la Intervención General que el compromiso de implantar el sistema de contabilidad financiera es a partir del 1 de enero de 1995 y que el subsistema de proyectos de inversión fue implantado en la Comunidad Autónoma el 1 de noviembre de 1992, acompañando el "dossier" de las instrucciones para su entrada en funcionamiento.

Este Consello se ratifica completamente en su informe.

B) La Creación de conceptos presupuestarios para cada uno de los Fondos de la CEE.-

Estudiadas las alegaciones, este Consello se ratifica en su informe.

Sexta: Respecto al Ajuste Propuesto a la Liquidación Presupuestaria del apartado 6.2.-

Este Consello se ratifica en que los citados mandamientos debieron estar contabilizados en derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, de acuerdo con la siguiente legislación vigente:

- El artículo 39 de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda del 1 de diciembre de 1989 por la que se implanta un nuevo sistema de información contable en la Administración de la Xunta de Galicia (D.O.G. nº 238, jueves, 14 de diciembre de 1989) establece que:

"Cada oficina contable reflejará en el "Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos, Presupuestos Cerrados", en cada ejercicio, la gestión efectuada de los derechos presupuestarios pendientes de cobro desde el inicio del ejercicio hasta el final del mes de la fecha en los conceptos presupuestarios correspondientes".

- Asimismo, en los criterios de valoración de la citada Orden se establece que:

"3.- Principio de devengo: Los ingresos y gastos se atribuirán al ejercicio económico en que tenga lugar el devengo, independientemente de las fechas en que se produzcan los correspondientes cobros y pagos.

No obstante, deberán contabilizarse, tan pronto como se conozcan, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales".

En virtud de lo anteriormente expuesto, sí procedía haber contabilizado los citados ingresos como derechos reconocidos de contraído previo del ejercicio 1989, aunque la recaudación efectiva del abono del Banco de España se produzca en 1990.

Séptima: La Opinión Final.-

Respecto al ajuste, este Consello se ratifica en el mismo, por entender que es completamente procedente.

ANEXOS

ANEXO V

ALEGACIONS O PROXECTO DO INFORME DE FISCALIZACION RELATIVO O FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) CORRESPONDENTE O EXERCICIO DE 1990

ESCRITO DE ALEGACIONS O: ANTEPROXECTO DO INFORME DE FISCALIZACION RELATIVO O FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) CORRESPONDENTE O EXERCICIO DE 1990

PRIMEIRA: O MARCO LEGAL DO FEDER

OBSERVACIONS:

Sinálase na páxina 19 do informe o seguinte:

"Os créditos dos Presupostos da Comunidade Autónoma de Galicia para 1990 conteñen os seguintes créditos do obxectivo nº 1 do FEDER, correspondentes ó Programa Operativo de Galicia 90-93."

Desglosándose os mesmos, o seu importe total ascende a 6.607.023.000 pesetas.

ALEGACIONS:

Os créditos FEDER consignados nos Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma para 1990, non corresponden na súa totalidade ó Progarama Operativo de Galicia I 1990-1993, senon que unha parte dos mesmos pertencen á anualidade 1990 do FEDER-1988 E FEDER-1989.

Así, na materia de Estradas dos 3.472,712 millóns presupostados, 102,9 millóns corresponden ó FEDER-1988 e 632,31 ó FEDER-1989.

No que respecta a Obras Hidráulicas, 581,35 millóns forman parte da anualidade 1990 do FEDER-1989.

Finalmente, no relativo a Portos dos 443,0 millóns asignados nos Presupostos FEDER de 1990, 305,0 concernen á programación do FEDER-1989 na súa anualidade 90.

SEGUNDA: A DETERMINACION DO GRAO DE EXECUCION

OBSERVACIONS:

A) XERAIS.-

No apartado 3.2. do anteproxecto de informe establécese que:

"A noción do grao de execución corre parella ó desenvolvemento ou avance dos proxectos de investimento ... Existen distintos niveis de cuantificación do grao de execución en función da fase presupostaria na que para elo nos situaremos ...".

Establécense no mesmo apartado tres distintos graos de execución presupostaria, que se definen e identifican coas fases presupostarias de: compromisos de gasto ou disposicións (D), obrigas recoñecidas (O) e pagos realizados (P).

Máis adiante considérase que as fases máis significativas en orde á cuantificación do grao de execución son as de "obrigas recoñecidas" (O) e "pagos ordenados" (P); polo que no informe móstranse e analízanse as mesmas.

ALEGACIONS:

Como ben se indica na páxina 26 do informe, o recoñecemento da obriga é a operación pola que se contraen en contas os créditos esixibles derivados da realización efectiva dunha contraprestación.

Parece moi subxectivo analiza-lo grao de execución do presuposto en base únicamente ás obrigas recoñecidas no exercicio; máxime cando se trata de gastos de capital, como é o caso que nos ocupa, sen ter en conta outras consideracións.

Nun sistema de execución presupostaria ideal, ó finaliza-lo exercicio, as obrigas igualaríanse ás disposicións. Parece lóxico, que para os gastos correntes, normalmente periódicos, a execución final se aproxime á ideal.

Non obstante, dende o momento en que tanto a lei xeral presupostaria, como a lei 11/1992 de 7 de outubro de réxime financeiro e presupostario de Galicia contemplan a posibilidade de que existan incorporacións de créditos, considerando esta figura como unha modificación presupostaria, é obvio que se prevé a existencia ó final do exercicio de remanentes de crédito comprometidos, os cales deben obedecer, salvo outro tipo de incidencias, ás prestacións realizadas no último mes do exercicio, que por imponderables atribuíbles ó peche do mesmo a unha data, non é posible contrae-las súas correspondentes obrigas en contas.

Outro motivo que pode incidir directamente na fase de execución de obrigas recoñecidas, serían os retrasos e demoras na entrega da contraprestación, que sole coincidir naqueles tipos de gastos que son máis complexos na súa realización e que, teñen polo tanto, unha alta cuantificación económica.

Polo que respecta os retrasos da execución, cabe suliñar, que a normativa legal que regula os contratos contén determinadas prerrogativas da Administración aplicables os casos, pero, en calquera caso, a adopción das mesmas debe condicionarse ó posible resultado negativo da súa adopción.

Polo tanto, califica-lo grao de execución presupostaria de forma porcentual en base as obrigas recoñecidas no exercicio, consideramos que non representa a realidade da execución, se non se teñen en conta además os motivos que o orixinan.

Por tódo-lo anteriormente exposto, e tendo en consideración que a responsabilidade dos órganos xestores radica na execución do seu presuposto como consecuencia da realización das accións que contén o mesmo; e que esta execución, debe dividirse en dúas partes perfectamente diferenciadas; unha, a que corresponde á cumprimentación de tódo-los trámites administrativos conducentes ó inicio da execución por parte do adxudicatario da contraprestación e, outra, á realización efectiva da contraprestación; e, sendo únicamente a primeira responsabilidade directa do órgano xestor, non parece lóxico califica-lo grao de cumprimento da segunda como responsabilidade da Administración.

B) ESPECIFICAS.-

Nos apartados 4.1.3. a 4.1.6. ámbolosdous inclusive, do anteproxecto de informe detállanse os graos de execución por seccións presupostarias, que dan lugar ó resume xeral do grao de execución do apartado 4.1.7. e á conclusión do apartado 4.1.8.

ALEGACIONS:

Os graos de execución presupostaria que se analizan no anteproxecto do informe de ese Departamento establécense únicamente como o resultado dunha simple operación aritmética, sen que se poña de manifesto no mesmo os motivos que os orixinan. Polo que da súa lectura pódense derivar conclusións erróneas ó facer depender exclusivamente de ese parámetro a calificación da xestión realizada.

Así, no apartado 4.1.4. relativo ó análise do grao de execución da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria considérase como baixa a execución da mesma e indícase que non se executaron catro proxectos por importe total de 306 millóns de pesetas; cando entrando na análise da execución dos citados proxectos fácilmente podería deducirse a imposibilidade da súa realización como consecuencia de que, por pertencer os mesmos ó programa de ensinanzas universitarias dependían para a súa realización duns trámites alleos a esta Administración Autonómica que poden concretarse nos seguintes:

- Debía formalizarse previamente a cesión dos terreos ás Universidades e para iso era preciso que os Concellos modificasen os plans urbanísticos de forma que permitiran recalificar o solo para as necesarias dotacións.

- O mesmo tempo as cesións esixían un complexo trámite na súa instrumentación xa que ó non poder aillar as Facultades e polo tanto, afectar a unha grande extensión; unhas cesións instrumentáronse por expropiación, outras por permuta e outras por adquisición.

- Unha vez realizados estos complexos trámites era preciso acometer previamente as obras de urbanización das parcelas.

Todo este complexo entramado de actuacións obviamente, non poden realizarse nun só acto e, en calquera caso, non depende de esta Administración a súa realización.

TERCEIRA: AS RECOMENDACIONS CONTIDAS NO APARTADO 4. "RESUME XERAL DO GRAO DE EXECUCION"

OBSERVACIONS:

No apartado 4.1.7 "resume xeral do grao de execución", na páxina 51, do anteproxecto de informe afírmase:

"A cantidade pendente de pago ó 31-XII-90 é moi elevada en comparación coas obrigas recoñecidas ... Deberon de materializarse máis pagos xa que en FEDER houbo un superávit de caixa ...".

Polo que máis adiante no mesmo apartado, recoméndase que no sucesivo se trate de ordenar pagos ó final do exercicio, cando existan ordes de pago pendentes de materializar con superávit de caixa e, así mesmo, que se aceleren ó máximo os pagos por FEDER cando teñan tesourería sobrante.

ALEGACIONS:

Cando se sinala nos apartados 4.1.3 a 4.1.6. (detalle individualizado por seccións), a porcentaxe de pagos realizados estáse calculando sobre o presuposto vixente. Nembargantes no apartado 4.1.7. (resume xeral) non se segue o mesmo criterio por canto se indica que a cantidade pendente de pago a 31-XII-90 é moi elevada, (2.062.081.000 pesetas) en comparación coas obrigas recoñecidas.

Para a calificación individualizada do grao de execución, tómase como base de cálculo o presuposto vixente; nembargantes, para a calificación global tómanse como base as obrigas recoñecidas.

Como ben se indica no apartado 4.1.7., o final do exercicio, e como consecuencia das operacións de peche, os documentos en fase "K" (proposta de pago), tiveron como data límite de entrada o 17 de decembro; nembargantes os documentos "A", "D" e "O" tiveron como data límite de entrada nas oficinas contables o 28 de decembro.

Obviamente, deberá existir, como mínimo un saldo de obrigas positivo, por todas aquelas que se tramitaron no intervalo comprendido entre as mencionadas datas. Polo tanto o cálculo sobre ditos parámetros non pode servir de base para califica-la xestión das oficinas xestoras.

Se a todo elo engadimos que entre a fase "O" e a fase "P" existen tres fases presupostarias máis, a saber : proposta de pago (K), ordenación, e sinalamentos (provisional e definitivo), chegaremos á conclusión de que o único parámetro válido, será analizar os pagos realizados en función das propostas recibidas no tesouro.

Cabe destacar así mesmo, que o proceso que debe seguirse entre a ordenación e o pago material, por servidumes informáticas, está situado nun mínimo de tres días. Lóxicamente, ó producirse o corte para o análise nun día concreto (31-XII) deberá existir un saldo positivo na ordenación pendente de pago.

Por isto, a conclusión de que deberan materializarse máis pagos non pode fundamentarse en que houbo un superávit de caixa en FEDER senón máis ben, no análise detallado da antigüidade da ordenación.

Aínda, con todo elo, as porcentaxes totais de execución serían as seguintes:

$$* \frac{\text{Disposicións}}{\text{Pto. vixente}} = 92{,}82\%$$

$$* \frac{\text{Obrigas}}{\text{Disposicións}} = 93{,}89\%$$

$$* \frac{\text{Obrigas recoñecidas}}{\text{Pto. vixente}} = 87{,}15\%$$

Ptas. pago
* ---------- = 77,44%
obrigas recoñecidas

Pagos ordenados
* ---------- = 88,83%
Ptes. pago

Pagos realizados
* ---------- = 100%
Pagos ordenados

O anteriormente exposto reflexa un grao de execución moi aceptable, casi excelente, conforme se indica no apartado 4.1.8. de conclusións. Na súa virtude esta Administración Autonómica, considera acertada a calificación global do grao de execución pero non así a determinación das porcentaxes, tanto globalmente como individualizadamente por seccións.

CUARTA: A RECOMENDACION PROPOSTA NO APARTADO 5. "CONTRATACION ADMINISTRATIVA".

OBSERVACIONS:

No apartado 5. (Pax. 67) do anteproxecto de informe sinálase:

"... Deberáse procura-lo uso do sistema de subhasta, xa que sen encorrer en baixas temerarias, obtéñense condicións económicas máis vantaxosas."

ALEGACIONS:

Esta Administración discrepa da opinión contida no informe, en canto se sinala que ó utilizar o sistema de subhasta, obtéñense condicións económicas máis vantaxosas.

Entende esta Administración que as condicións económicas favorables non veñen determinadas tanto polo sistema de adxudicación utilizada na contratación administrativa, senón pola celeridade na realización do proceso de pagamentos.

No procedemento de subhasta adxudicaráse á proposición económicamente máis vantaxosa. No procedemento de concurso adxudicaráse á proposición máis vantaxosa sen atender exclusivamente ó valor económico da mesma.

Pero, si tódo-lo anteriormente exposto son principios que inspiran o procedemento que debe seguirse para a adxudicación; polo que respecta á contratación, a lexislación de contratos do Estado determina de maneira indubitable os requisitos necesarios para a adopción de cada un dos sistemas.

Este apartado 5. do informe refírese a contratación administrativa, polo que, si os expedientes revisados cumplen os requisitos que lle sexan esixibles, entende esta Administración que debería excluírse o citado comentario, e máis aínda cando se representa de forma porcentual e comparativa.

QUINTA: AS RECOMENDACIONS CONTIDAS NO APARTADO 6. "AVALIACION DO CONTROL INTERNO".

A) A IMPLANTACION DA CONTABILIDADE FINANCEIRA E O SUBSISTEMA DE PROXECTOS DE INVESTIMENTO.-

OBSERVACIONS:

Na páxina 73 do informe, e referíndose os proxectos do FEDER, sinálase o seguinte:

"... recoméndase o mesmo control que para o F.C.I., debéndose implanta-la contabilidade financeira, analítica e os subsistemas de proxectos de investimento que permita un correcto seguimento por proxecto de forma individualizada coas súas fontes de financiamento."

ALEGACIONS:

Estando conforme esta Administración coa recomendación que se formula en orde á implantación da contabilidade financeira, é preciso indicar que o seu obxectivo fundamental consiste en conquerir que a información económica e financeira ofrecida sexa homoxénea, analizable e integrable coa ofrecida pola Administración do Estado e as restantes Administracións Autonómicas.

Neste senso, é importante destacar que por acordo do "Consejo de Política Fiscal y Financiera" de 29 de novembro de 1991, constituíuse un grupo de traballo integrado por tóda-las Intervencións Xerais das distintas administracións. O mencionado grupo de traballo, no ámbito da normalización contable da información económico-financeira, adoptou un acordo para a súa elevación ó Consello, en relación co calendario para a futura normalización total, acadándose o compromiso de implantar o sistema de contabilidade financeira a partir do 1 de xaneiro de 1995.

Polo que respecta a implantación do subsistema de proxectos de investimento é necesario indicar que con data 1 de novembro de 1992, foi implantado nesta Administración polo que, con este Escrito de Alegacións, adxunto se acompaña o dossier que contén as instruccións para a súa entrada en funcionamento.

Estimamos por tanto convinte a súa inclusión no informe co obxecto do seu coñecemento por parte dos destinatarios do mesmo.

B) A CREACION DE CONCEPTOS PRESUPOSTARIOS PARA CADA UN DOS FONDOS DA CEE.-

OBSERVACIONS:

Na páxina 73 do anteproxecto do informe, faise a seguinte recomendación:

"Na contabilización dos ingresos recoméndase que se creen conceptos ou subconceptos distintos para cada un dos fondos da CEE, co fin de poder identificar en cada momento a situación do financiamento do presuposto de gastos..."

ALEGACIONS:

Dado que, xa foron iniciados os traballos previos para a implantación do subsistema de financiamento vinculado ou afectado, estimándose que poida encontrarse operativo durante o próximo exercicio presupostario, é polo que consideramos excusada a mencionada recomendación.

SEXTA: RESPECTO O AXUSTE PROPOSTO A LIQUIDACION PRESUPOSTARIA DO APARTADO 6.2..-

OBSERVACIONS:

Na páxina 74 do informe, sinálase:

"O examinar e verifica-la recadación do concepto 790.- Do Exteriro, Provenientes da CEE. FEDER, observáronse dous mandamento de ingreso contabilizados no exercicio 1990 como recadación do presuposto corrente de 1990, cando realmente deberían ser contabilizados como de exercicios pechados en dereitos pendentes de cobro de exercicios anteriores.

Os citados mandamentos, como mínimo, son os seguintes:

DATA BANCO DE ESPAÑA	*DATA MANDAMENTO ADMINSTRACION CENTRAL*	*DATA MANDAMENTO COMUNIDADE AUTONOMA*	*IMPORTE (miles de pts)*
05-01-90	*14-12-89*	*20-02-90*	*10.179.-*
13-02-90	*14-12-89*	*15-02-90*	*317.285.-*
SUMA TOTAL			*327.464.-*

ALEGACIONS:

Os citados ADOK foron contabilizados pola Administración Central con data 21-XII-1989; e non foron recibidos nesta Administración con anterioridade ó 31-XII-1989. No momento da súa recepción atopábase pechado o exercicio de 1989, polo que non era posible contabilizar os correspondentes dereitos recoñecidos no devandito exercicio.

Recibidos os ingresos na conta operativa do Banco de España con datas 5 de xaneiro e 13 de febreiro de 1990, debían aplicarse ó exercicio de 1990, polo que efectivamente foron aplicados ó mesmo.

Non procede, polo tanto, que foran contabilizados como de exercicios pechados en dereitos pendentes de cobro de exercicios anteriores por non existir os mesmos.

Na súa consecuencia, esta Administración entende que non procede o axuste proposto.

SEPTIMA: A OPINION FINAL.-

OBSERVACIONS:

No apartado 7. do anteproxecto do informe, recóllese a seguinte opinión:

"... salvo pola salvedade exposta no apartado 6.2 de Axustes, o Libro Maior de Conceptos Presupostarios e a Liquidación de 1990 referida ó concepto FEDER presentan axeitadamente a situación presupostaria e financeira dos gastos da execución dos proxectos e das percepcións das dotacións do seu Estado de Ingresos, de conformiddade cos principios e criterios correspondentes á Contabilidade Pública Presupostaria, á Lei de Xestión Económica e Financeira Pública de Galicia, e demais normativa vixente ó 31-12-90."

ALEGACIONS:

Non procedendo o axuste á salvedade exposta no apartado 6.2. de Axustes, entendemos que a mesma deberá ser excluída da opinión final.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 1992
O INTERVENTOR XERAL
DA COMUNIDADE AUTONOMA

Asdo. JUAN JOSE NOVOA MONTERO

INFORME DE FISCALIZACION FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

EJERCICIO 1990

INDICE

1. INTRODUCCION

1.1 Marco legal del Fondo de Compensación Interterritorial
1.2 Bases legales de actuación de la Sindicatura de Cuentas

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CONTROL REALIZADO

3. METODOLOGIA

3.1 Periodo de ejecución
3.2 Determinación del grado de ejecución
3.3 Descripción del trabajo realizado

4. GRADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FCI DE 1989

4.1 Dotación inicial y ejecución al 31 de diciembre de 1989
4.2 Modificaciones del ejercicio 1990
4.3 Ejecución durante el ejercicio 1990
4.4 Comentarios al grado de ejecución
4.5 Ejecución global del FCI de 1989
4.6 Fondos solicitados por la Generalitat Valenciana a la Administración Central

5. GRADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FCI DE 1990

5.1 Dotación inicial
5.2 Modificaciones
5.3 Grado de ejecución de los proyectos en el ejercicio 1990
5.4 Comentarios al grado de ejecución
5.5 Fondos solicitados por la Generalitat Valenciana a la Administración Central
5.6 Distribución territorial de la inversión

6. PERCEPCION DE LAS DOTACIONES DEL FCI

6.1 Regulación legal
6.2 Ingresos del FCI en el ejercicio 1990

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCION

1.1 Marco legal del Fondo de Compensación Interterritorial

La Constitución Española, en su artículo 158, apartado 2, establece que, *"con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y Provincias, en su caso"*. Las transferencias correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial (en adelante FCI o Fondo) deben contemplarse, pues, entre los recursos de las Comunidades Autónomas, tal como viene expresamente recogido en el artículo 157.1.c) de nuestra Constitución.

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), desarrolla en su artículo 16 el mandato constitucional, señalando los principios generales que han de configurar el mencionado Fondo, y encomendando a una Ley ordinaria la regulación específica del mismo.

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del Fondo de Compensación Interterritorial, cumplió la previsión de la LOFCA, precisando los aspectos esenciales del Fondo, su funcionamiento e instrumentación.

El 28 de diciembre de 1990 entra en vigor una nueva ley reguladora del FCI, la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, que surte efectos a partir del 1 de enero de dicho año. Esta nueva Ley introduce ciertas reformas sobre el FCI, fundamentalmente en relación a los siguientes aspectos:

a) La determinación de los territorios beneficiarios del FCI, que se hace a nivel de Comunidades Autónomas y únicamente las de menor desarrollo económico dentro del Estado.

b) La determinación de la cuantía global del FCI y la definición de las variables de reparto y ponderación.

c) El destino de los recursos del FCI, permitiéndose que a partir del 1 de enero de 1990 puedan financiar tanto inversiones reales como transferencias de capital.

d) La administración y percepción de los recursos del FCI, estableciendo nuevos criterios y plazos que permitan su puesta a disposición de las Haciendas autonómicas de modo que éstas puedan cumplir puntualmente sus compromisos de gasto, y respetando su autonomía financiera.

No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1990 establece que los proyectos de inversión del Fondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por la Ley 7/1984.

Por su parte, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1990 establece las Comunidades Autónomas que serán beneficiarias del FCI en los ejercicios 1990 y 1991, incluyendo entre las mismas a la Comunidad Valenciana. Para los ejercicios siguientes serán beneficiarias las Comunidades Autónomas que figuren designadas en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

1.2 Bases legales de actuación de la Sindicatura de Cuentas

El artículo 9 de la Ley 29/1990 hace referencia al control parlamentario, estableciendo en el apartado 1 lo siguiente:

"1. El control parlamentario de los proyectos de inversión financiados con cargo al Fondo se llevará a cabo por las Cortes Generales, a través de la Comisión de Seguimiento constituida en el Senado, y por las Asambleas Legislativas de las respectivas Comunidades Autónomas."

La actuación de la Sindicatura de Cuentas se justifica en el apartado 2 de dicho artículo 9:

"2. No obstante, el Tribunal de Cuentas del Estado y, en su caso, los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas, presentarán ante los Organos Legislativos citados en el número 1 anterior, respectivamente, informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial."

El preámbulo de la Ley es más explícito al referirse a este informe, ya que establece que:

"Respecto a la ejecución de las inversiones que, con cargo al Fondo, se acuerden entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas perceptoras, se establece un mecanismo de control parlamentario atribuido al Senado y encauzado con la intermediación del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas, que deberán presentar un informe sobre el grado de ejecución de los proyectos de inversión."

Especificación que está en línea con lo dispuesto por el artículo 16.4 de la LOFCA:

"Cada territorio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, así como del estado de realización de los proyectos que con cargo al mismo estén en curso de ejecución".

Con objeto de permitir el control parlamentario, el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 29/1990 establece que:

"... las Comunidades Autónomas contabilizarán analíticamente los costes imputables a cada proyecto de inversión, así como las unidades físicas de realización del mismo que resulten más significativas."

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CONTROL REALIZADO

El control realizado por esta Sindicatura de Cuentas tiene como objetivo dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 9.2 de la Ley del FCI, es decir, presentar un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con el FCI.

El articulado de la Ley del FCI no recoge el contenido concreto del informe, aunque en el preámbulo de dicha Ley se especifica que el informe deberá ser acerca del grado de ejecución de los proyectos, puntualización que va en línea con el artículo 16.4 de la LOFCA, que establece que la rendición de cuentas versará sobre el destino de los recursos del FCI y el estado de realización de los proyectos.

En este sentido, los objetivos y el alcance del presente informe son los siguientes:

Como primer objetivo, mostrar y evaluar el grado de ejecución de los proyectos financiados con el FCI, analizando:

- Las dotaciones iniciales de los proyectos que integran el FCI.
- Las modificaciones sobre dichas dotaciones iniciales.
- La ejecución por proyectos, programas y departamentos al 31 de diciembre.
- La regularidad contable de los créditos del FCI, comprobando su imputación al periodo y concepto que les corresponden.
- Las solicitudes de fondos y percepción de los mismos durante el ejercicio.
- La regularidad legal de las actuaciones realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta a:
  - La naturaleza de los gastos realizados.
  - Las modificaciones realizadas de acuerdo a las normas aplicables.
  - La aplicación de la contabilidad analítica a los proyectos del FCI, según establece la Ley reguladora.

Y como segundo objetivo, evaluar el control interno de la Administración de la Generalitat Valenciana en lo que respecta a la coordinación, control y seguimiento del FCI.

El presente informe abarca los proyectos de inversión que en el ejercicio 1990 están financiados con cargo al FCI, haya sido dotado éste en el ejercicio 1990, o bien en el ejercicio 1989. Sobre el FCI dotado en el ejercicio 1989 esta Sindicatura emite el informe correspondiente, de fecha 9 de septiembre de 1992, sobre la ejecución de los proyectos que integran dicho Fondo al 31 de diciembre de 1989. El presente informe continúa con el análisis de dichos proyectos durante el ejercicio 1990, y su ejecución al 31 de diciembre de este último ejercicio.

3. METODOLOGIA

3.1 Periodo de ejecución

La dotación del FCI es anual, quedando determinada en las respectivas leyes de presupuestos generales del Estado.

La nueva Ley del FCI, 29/1990, establece en su Disposición Transitoria Primera que los proyectos de inversión del Fondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por la Ley 7/1984, de 31 de marzo.

Esta última Ley consideraba un período bianual para la ejecución de los proyectos de inversión, ya que establecía en su artículo 12.1 lo siguiente:

"Los remanentes de créditos no comprometidos, correspondientes a proyectos de inversión financiados con cargo a la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial asignada a una Comunidad Autónoma en materias de su competencia, se incorporarán en el ejercicio inmediato posterior a los créditos del Fondo de Compensación Interterritorial de esa Comunidad Autónoma en las mismas materias. Si al finalizar este último ejercicio persistiesen tales remanentes no comprometidos, éstos se incorporarán al Fondo de Compensación Interterritorial del siguiente ejercicio con destino a proyectos de la competencia de la Administración del Estado a realizar en el ámbito de dicha Comunidad Autónoma".

Paralelamente, el apartado 2 establecía que los remanentes de créditos no comprometidos al finalizar el segundo ejercicio del bienio, correspondientes a

proyectos de inversión financiados con cargo a la dotación del FCI asignado a una Comunidad Autónoma en materias de competencia del Estado, se incorporarían al FCI del siguiente ejercicio, con destino a proyectos de competencia de la respectiva Comunidad que ésta decida realizar.

Sin embargo, estas disposiciones de la antigua Ley del FCI fueron modificadas por posteriores Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que autorizaban a que los remanentes de crédito del FCI de ejercicios anteriores se incorporasen al presupuesto siguiente a disposición de la misma Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 contempla este criterio en su artículo 79.4.

La nueva Ley del FCI estipula, en el artículo 7.5, que los remanentes de créditos del Fondo en un ejercicio económico quedarán afectos en los siguientes a la ejecución del respectivo proyecto de inversión o, en su caso, del que le sustituya, a cuyos efectos dichos remanentes serán incorporables automáticamente.

3.2 Determinación del grado de ejecución

La normativa legal que regula el FCI, incluyendo la nueva Ley 29/1990, no define el concepto de grado de ejecución, nivel de realización o grado de cumplimiento de los proyectos de inversión. La trascendencia que este concepto tiene para el establecimiento y evaluación del nivel de cumplimiento de la normativa reguladora aconseja mencionar el significado que a efectos del presente informe se le atribuye, y que ya fue definido por esta Sindicatura en informes anteriores.

La noción de grado de ejecución corre pareja al desarrollo o avance de los proyectos de inversión, de tal forma que su cuantificación irá aumentando progresivamente a medida que se cubran las diferentes fases presupuestarias. Existen distintos niveles de cuantificación del grado de ejecución en función de la fase presupuestaria en la que para ello nos situemos. La decisión que se plantea es la de establecer cuál de estos niveles de cuantificación resulta pertinente considerar en cada ocasión.

Tomando como punto de referencia los artículos 12.1 de la primera Ley del FCI o 7.5 de la nueva Ley, se puede definir una primera cuantificación del grado de ejecución, identificándolo con los créditos comprometidos en proyectos de inversión financiados con cargo a las dotaciones del FCI. El término créditos comprometidos equivale a los compromisos contraídos con cargo a los créditos del presupuesto de gastos, créditos que, en definitiva, se encuentran en fase contable D.

Las obligaciones reconocidas constituyen el segundo nivel de cuantificación del grado de ejecución, y se corresponden con los créditos que se encuentran en la fase contable O.

Finalmente, una tercera cuantificación del grado de ejecución se identificaría con la situación de ordenación del pago, que se traduce en la fase contable K.

La Administración de la Generalitat Valenciana, según se deduce de la información rendida a esta Sindicatura, considera como índice del grado de ejecución de los proyectos financiados con las dotaciones del FCI el nivel de pagos ordenados durante el ejercicio, y así se muestra en los apartados sucesivos del presente informe.

Adicionalmente, el informe incluye información relativa a las peticiones de fondos realizadas por la Generalitat Valenciana a la Administración Central para que ésta última los reembolse en los términos establecidos en el artículo 10.2 de la Ley 7/1984 (fondos anteriores a 1990) o en los artículos 7 y 8 de la Ley 29/1990 (FCI de 1990). Igualmente, se ofrece información sobre los ingresos del ejercicio 1990 en concepto de FCI.

Con toda esta información, se estima que se ofrece una visión lo suficientemente ajustada del desarrollo de la ejecución financiera del FCI correspondiente a la Comunidad Valenciana, al 31 de diciembre de 1990.

3.3 Descripción del trabajo realizado

La Sindicatura de Cuentas con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el apartado 2 de este [illegible] los procedimientos y llevado a cabo las pruebas de auditoría que [illegible] necesarias y adecuadas a las circunstancias y al alcance del control realizado.

El trabajo se ha desarrollado recabando la documentación pertinente de la Conselleria de Economía y Hacienda, a través de la Intervención General.

Los procedimientos seguidos y las pruebas realizadas han consistido, fundamentalmente, en lo siguiente:

1. Solicitar a la Intervención General de la Generalitat Valenciana la información y documentación relativa a la ejecución de proyectos financiados con los FCI durante el ejercicio 1990.
2. Verificar la coincidencia entre la dotación inicial incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 1990 como FCI para la Comunidad Valenciana, y la que figura en el Presupuesto de la Generalitat Valenciana para el mismo periodo, analizando posteriormente si han tenido lugar modificaciones que hayan hecho variar la mencionada dotación inicial, y la revisión con su correspondiente documentación soporte en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales establecidos.
3. Comprobar, con el registro "Estado de ejecución de los proyectos de inversión", obtenido de la Conselleria de Economía y Hacienda, la fase contable en que se encontraban los proyectos al 31 de diciembre de 1990.
4. Analizar la documentación que soporta los importes solicitados por la Generalitat Valenciana a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de percibir las dotaciones del FCI que corresponden a la Comunidad Valenciana.
5. Verificar los importes reembolsados por la Administración Central con la documentación soporte de éstos, y su correcta contabilización por parte de la Administración de la Generalitat Valenciana.
6. Comparar las cifras de pagos ordenados en ejecución de proyectos FCI con las solicitadas a la Administración Central, a efectos de la percepción de las correspondientes dotaciones.
7. Analizar las solicitudes de fondos por parte de la Generalitat Valenciana con los reembolsos efectivos por parte de la Administración Central.

4. GRADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL F.C.I. DE 1989

4.1 Dotación inicial y ejecución al 31 de diciembre de 1989

La ejecución al 31 de diciembre de 1989 de los proyectos financiados con el FCI de 1989 fue fiscalizada por esta Sindicatura, emitiéndose el informe correspondiente con fecha 9 de septiembre de 1992.

La dotación inicial del FCI de 1989 a gestionar por la Generalitat Valenciana ascendió a 12.381,9 millones de pesetas. Esta cifra no ha tenido variación en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, aunque han tenido lugar modificaciones que han consistido en cambios en la dotación y sustituciones en los proyectos de inversión financiados con dicho FCI.

Tal como se puso de manifiesto en el informe de la Sindicatura antes citado, los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de abril y 12 de mayo de 1989 disminuyeron las dotaciones iniciales del FCI de 1989 correspondiente a la Comunidad Valenciana en la cuantía de 1.498,9 millones de pesetas. La Generalitat Valenciana interpuso recurso contencioso-administrativo contra estos Acuerdos, solicitando que fueran declarados nulos, recurso que está pendiente de resolución a la fecha de redacción del presente informe.

Al 31 de diciembre de 1989, el grado de ejecución global de los proyectos que integraban el FCI de dicho ejercicio ascendió al 63,8%, nivel razonable en el primer año de ejecución. Las peticiones de fondos (certificaciones) realizadas a la Administración Central, fueron por importes que supusieron un 41,5% de las dotaciones totales y un 65,2% sobre los pagos ordenados en ejecución de los proyectos, recibiéndose fondos que representaban un 23,9% sobre las dotaciones y un 37,5% sobre los pagos.

4.2. Modificaciones del ejercicio 1990

La Generalitat Valenciana no ha formalizado expedientes de modificación presupuestaria para reajustar a la baja los ingresos correspondientes al FCI de 1989, en relación a la disminución de las dotaciones derivada de los Acuerdos del Consejo de Ministros indicada en el apartado 4.1 anterior.

Durante el ejercicio 1990 se ha formalizado un único expediente de modificación, aprobado por el Conseller de Economía y Hacienda el 11 de mayo de 1990, con las siguientes incidencias:

- 16 proyectos, con una dotación inicial de 399,3 millones de pesetas, se excluyen totalmente del FCI.
- 62 proyectos, con una dotación inicial de 7.124,5 millones de pesetas, ven incrementada su dotación a 7.521,3 millones de pesetas.
- Se incluye 1 proyecto nuevo, con una dotación de 2,5 millones de pesetas.

El resumen de estas variaciones es el siguiente:

	01-01-90		31-12-90	
	Nº	Dotación (MP)	Nº	Dotación (MP)
Proyectos que no varían	44	4.858,1	44	4.858,1
Proyectos sustituidos	16	399,3	–	–
Proyectos modificados	62	7.124,5	62	7.521,3
Proyectos nuevos	–	–	1	2,5
TOTAL	122	12.381,9	107	12.381,9

Las modificaciones por programas han sido las siguientes:

Denominación programa	Millones de pesetas		
	Dotación 01-01-90	Dotación 31-12-90	Variación
Protección del medio ambiente	0	2,5	2,5
Arquitectura y vivienda	2.202,1	2.235,1	33,0
Infr. urb., san. y abast. agua e infr. hidráulicas	3.351,4	2.985,3	(366,1)
Infr. carreteras, conservación y explotación	3.640,5	3.715,8	75,3
Infraestructura del transporte ferroviario	630,4	582,9	(47,5)
Infr. explotación portuaria y actuaciones costa	182,0	162,1	(19,9)
Enseñanzas secundarias	502,9	541,1	38,2
Estructuras agrarias y zonas desfavorecidas	1.392,7	1.638,6	245,9
Transferencia, innovación y tecnología agraria	28,0	21,3	(6,7)
Ordenación y promoción industrial y energética	78,8	0	(78,8)
Servicios sociales	282,2	466,6	184,4
Condic. trabajo y adm. relaciones laborales	20,0	20,0	0
Salud	70,9	10,6	(60,3)
TOTAL	12.381,9	12.381,9	0

4.3 Ejecución durante el ejercicio 1990

La ejecución a 31 de diciembre de 1990, de los proyectos de inversión competencia de la Comunidad Valenciana financiados con el FCI del ejercicio 1989, se muestra en los cuadros 1 a 13 (desglose de programas por proyectos), y 14 (resumen general por programas y consellerias). Estos cuadros han sido preparados por la Sindicatura de Cuentas a partir de la información rendida por la Dirección General de Economía y Política Financiera, responsable de la coordinación y control de la ejecución del FCI, a través de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. Las dotaciones que figuran en los cuadros por programas son las correspondientes al ejercicio 1990, partiendo de las que quedaron pendientes de ejecutar al final del ejercicio 1989. El resumen global de los dos ejercicios de ejecución, 1989 y 1990, se muestra en el cuadro 15.

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA

Programa 442.1: Protección del medio ambiente

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFICACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
014 000 88	Restauración explotaciones mineras inactivas	0	2.500	2.500	2.500	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 442.1	0	2.500	2.500	2.500	100,0%

Cuadro 1

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 431.1: Arquitectura y vivienda

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFICACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
004 000 88	Construcción y reposición edificios Alcoi	50.000	(50.000)	0	0	–
050 000 85	Edificación 238 viviendas en Alicante	0	30.378	30.378	23.453	77,2%
030 000 86	Edificación 18 viviendas en Villavieja	3.726	(2.545)	1.181	1.110	94,0%
250 000 86	Edificación 92 viviendas en Silla	0	1.246	1.246	1.246	100,0%
350 000 86	Edificación 381 viviendas en Gabarda	16.613	(3.808)	12.805	7.772	60,7%
353 000 86	Terminación 71 viviendas en Monovar	0	4.890	4.890	4.890	100,0%
093 000 85	Edificación 150 viviendas en Elx	753	(436)	317	317	99,9%
060 000 85	Terminación 79 viviendas en Benaguacil	19.535	(19.281)	254	254	100,2%
005 000 88	Construcción y reposición edificios	0	369.380	369.380	369.380	100,0%
048 000 88	Alginet V-84/050 14 viviendas	5.633	(5.633)	0	0	–
010 000 87	Constr. y reposición edificios Castellón CS-87/100	10.639	1.179	11.818	11.818	100,0%
020 000 87	Constr. y reposición edificios Castellón CS-87/020	28.000	(27.200)	800	800	100,0%
031 000 86	Constr. y reposición edificios Dolores	0	182	182	0	0,0%
103 000 85	Constr. y reposición edificios Sagunto V-86/170	28.447	(28.447)	0	0	–
140 000 86	Constr. y reposición edificios Pedralba V-86/140	10.000	0	10.000	10.000	100,0%
151 000 86	Constr. y reposición edificios Xàtiva V-86/150	12.894	8.954	21.848	0	0,0%
180 000 86	Constr. y reposición edificios Quesa V-86/180	2.367	(2.124)	243	243	100,0%
230 000 86	Constr. y reposición edificios Monforte A-86/230	23.191	(20.610)	2.581	0	0,0%
003 000 88	Constr. y reposición edificios Alcoi. Viaducto	66.130	0	66.130	166.130	251,2%
100 000 85	Constr. y reposición edificios Alcoi. Rehab. A-86/240	51.229	(2.229)	49.000	642	1,3%
356 000 87	Alcoi. Urbanización casco antiguo A-87/100	105.401	(31.737)	73.664	14.768	20,0%
001 000 88	Adquisición edificios	22.536	(22.536)	0	0	–
042 000 88	A-86/560 69 Viviendas en Alicante. Terminación	90.057	(68.631)	21.426	21.345	99,6%
043 000 88	A-88/840 Urbanización Polígono Batoi	46.868	(40.896)	5.972	5.972	100,0%
044 000 88	A-88/840 Urbanización Cantagallet	20.932	(15.745)	5.186	5.187	100,0%
045 000 88	A-88/810 Alcoi. Urbanización L'Arsenal	46.127	(41.267)	4.860	4.860	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 431.1	661.076	33.083	694.159	650.187	93,7%

Cuadro 2

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES

Programa 512.1: Infraestructura urbana, saneamiento y abastecimiento de agua e infraestructura red hidrográfica

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFICACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
046 000 88	Encauzamiento de ramblas y barrancos	2.234	100.000	102.234	212.234	207,6%
209 000 89	Alcoi. Obra de infraestructura hidráulica	75.000	0	75.000	75.000	100,0%
208 000 89	Onteniente. Abastecimiento segunda fase	35.100	0	35.100	35.100	100,0%
207 000 89	Abastecimiento en la provincia de Castellón	114.549	0	114.549	114.549	100,0%
033 000 88	Camp del Turia. Saneamiento y depuración	99.250	(96.632)	2.618	2.618	100,0%
206 000 89	Foia de Castalla. Saneamiento	75.000	(75.000)	0	0	–
053 000 88	Saneamiento río Cañoles. Dep. Canals y Alcudia	125.000	(69.333)	55.667	55.667	100,0%
205 000 89	Elche. Infraestructura hidráulica	44.156	0	44.156	44.156	100,0%
001 000 89	Depuradora de Requena	16.000	(16.000)	0	0	–
010 000 86	Alcoi. Depuradora y colectores	53.900	(53.900)	0	0	–
034 000 87	Cocentaina. Depuradora y colectores	111.741	0	111.741	111.741	100,0%
031 000 88	Onteniente. Depuradora	46.871	0	46.871	46.871	100,0%
008 000 88	Santa Pola. Depuradora	210.356	(195.870)	14.486	14.486	100,0%
027 000 88	Benejuzar y otra. Depuradora	61.809	(16.662)	45.147	45.147	100,0%
029 000 88	Pilar de la Horadada. Saneamiento	31.320	(31.320)	0	0	–
099 000 86	Colector Oeste	20.355	0	20.355	20.355	100,0%
032 000 87	Vall de Uxó. Depuradora	70.694	0	70.694	70.694	100,0%
036 000 88	Saneamiento y depuradora nucleos aislados	121.800	0	121.800	121.800	100,0%
057 000 88	Modificados y liquidaciones	0	22.096	22.096	22.096	100,0%
246 000 88	Otras obras encauzamiento y defensa zonas	158.623	(133.238)	25.385	21.379	84,2%
058 000 88	Asistencias técnicas	0	95.375	95.375	95.375	100,0%
704 000 89	Transf. y subv. ayunt. abast. y recursos hidráulicos	65.980	104.335	170.315	170.315	100,0%
707 000 89	Encauzamiento y defensa T. M. Alcoi	100.000	0	100.000	0	0,0%
705 000 89	Colector Oeste. Primera fase	10.500	0	10.500	0	0,0%
702 000 89	Abastecimiento agua Consorcio Marina Alta	64.473	0	64.473	0	0,0%
	TOTAL PROGRAMA 512.1	1.714.711	(366.149)	1.348.562	1.279.584	94,9%

Cuadro 3

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 513.1: Infraestructura de carreteras, conservación y explotación

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
020 000 88	Eje vertebrador 4 Almansa-Gandía	133 467	0	133 467	133 467	100,0%
010 000 88	Eje vertebrador 5 Valencia-Alcoi-Alicante	162 000	(137.000)	25 000	24 231	96,9%
042 000 88	Eje vertebrador 6 Alcoi-Torrevieja	82 500	0	82 500	82 500	100,0%
038 000 88	Itinerario básico Aspe-Elx-Santa Pola	300 000	(206 991)	93 009	66.544	71,5%
039 000 88	Itinerario básico Orihuela-Guardamar	12 500	(11 500)	1 000	0	0,0%
037 000 88	Itinerario básico Elda-Moncvar-Pinoso	12.020	(7.537)	4 483	12.483	278,5%
053 000 89	Itinerario básico Ontiyent-Villena-Yecla	76.225	0	76 225	76 225	100,0%
028 000 88	Itinerario básico Onda-Grao de Burriana	67.094	(41.445)	25 649	25 648	100,0%
013 000 88	Acondicionamiento itinerario básico de Castellón	174.931	0	174 931	174 931	100,0%
014 000 88	Acondicionamiento itinerario básico de Valencia	0	0	0	9 000	-
001 000 88	Eje vertebrador Castellón-Morella	62 500	0	62 500	72 500	116,0%
002 000 88	Eje vertebrador Alzira-Borriol	62.090	0	62 090	62 090	100,0%
003 000 88	Eje vertebrador Valencia-Ademuz	79.124	0	79 124	79.124	100,0%
016 000 87	Mejora red local de Castellón	0	50.000	50 000	50 000	100,0%
018 000 88	Mejora red local de Alicante	0	50.000	50 000	50 000	100,0%
045 000 88	Asistencias técnicas	87.598	295.293	382.891	349 612	91,3%
046 000 88	Expropiaciones	0	0	0	177.993	-
047 000 88	Modificados y liquidaciones	4.067	21.173	25.240	19.450	77,1%
025 000 88	Eje vertebrador Valencia-Alcoi-Alicante. Ens. Xàtiva	34.900	(32.747)	2.153	12.153	564,5%
034 000 88	Itinerario básico Xàtiva-Terrateig (Cuatretonda)	1.292	0	1.292	1.292	100,0%
017 000 88	Mejora red local de Valencia	0	96.046	96.046	96.046	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 513.1	1.352.308	75.292	1.427.600	1.575.288	110,3%

Cuadro 4

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 513.2: Infraestructura del transporte ferroviario

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
001 000 86	Supresión paso nivel PK 7/053, línea La Encina	51.303	17.525	68 828	78 828	114,5%
002 000 86	Paso elevado Renfe Madrid-Alicante (Alicante)	9.684	0	9.684	9.683	100,0%
005 000 88	Tranvialización empalme Grao F.G.V.	50.000	(50 000)	0	0	-
007 000 88	Coordinación transporte área metropolit. Valencia	18.500	(15.005)	3.495	3.495	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 513.2	129.487	(47.480)	82.007	92.007	112,2%

Cuadro 5

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES

Programa 514.1: Infraestructura explotación portuaria y actuaciones en la costa

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
001 000 88	Nueva infraestructura portuaria	73.301	(19.946)	53.355	44.736	83,8%
	TOTAL PROGRAMA 514.1	73.301	(19.946)	53.355	44.736	83,8%

Cuadro 6

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA

Programa 422.3: Enseñanzas secundarias

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
010 000 89	Instituto de Bachillerato 640 P.E. Benidorm	6.262	38.156	44.418	44.175	99,5%
011 000 89	Instituto Form. Prof. 840 Polig. S. Gabriel de Alicante	20.314	0	20.314	20.200	99,4%
014 000 89	Instituto de Bachillerato en Sedaví	51.201	0	51.201	50.986	99,6%
013 000 89	Instituto de Bachillerato 640 P.E. Torrent	123.365	0	123.365	123.257	99,9%
	TOTAL PROGRAMA 422.3	201.142	38.156	239.298	238.619	99,7%

Cuadro 7

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Programa 531.1: Estructuras agrarias y zonas desfavorecidas

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-90	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
013 000 88	Obras de infraestructura agraria en ejecución	0	51.022	51.022	9.665	18,9%
121 000 88	Obras de infraestructura agraria provincia Valencia	0	127.094	127.094	127.094	100,0%
122 000 88	Obras de infraestructura agraria provincia Castellón	0	50.796	50.796	50.796	100,0%
123 000 88	Obras de infraestructura agraria provincia Alicante	0	17.010	17.010	17.010	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 531.1	0	245.922	245.922	204.565	83,2%

Cuadro 8

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Programa 542.2: Transferencia, innovación y tecnología agraria

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
011 000 88	Centro capacitación agraria en Llutxent	6.700	(6.700)	0	0	–
	TOTAL PROGRAMA 542.2	6.700	(6.700)	0	0	–

Cuadro 9

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Programa 722.1: Ordenación y promoción industrial y energética

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
012 000 88	Creación Escuela Diseño Artesano	13.750	(13.750)	0	0	–
014 000 88	Restauración explotaciones mineras inactivas	5.000	(5.000)	0	0	–
014 000 88	Investigación de lignitos	10.100	(10.100)	0	0	–
015 000 88	Investigación riesgo geológico	9.700	(9.700)	0	0	–
016 000 88	Análisis demandas rocas industriales	16.000	(16.000)	0	0	–
017 000 88	Análisis potencialidad diversos materiales	9.000	(9.000)	0	0	–
018 000 88	Evaluación potencial geotérmico	10.200	(10.200)	0	0	–
019 000 88	Estudio almacenamiento excedentes hídricos	5.000	(5.000)	0	0	–
	TOTAL PROGRAMA 722.1	78.750	(78.750)	0	0	–

Cuadro 10

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa 313.1: Servicios sociales

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
002 000 88	Construcción 6 residencias de ancianos	36.746	138.860	175.606	175.607	100,0%
004 000 88	Construcción 8 talleres ocupacionales y otros fines	25.116	(19.304)	5.812	25.812	444,1%
005 000 88	Construcción 5 residencias y otros (menores)	26.410	68.610	95.020	95.021	100,0%
006 000 88	Reformas 8 pisos tutelados (mujer)	10.000	(10.000)	0	0	–
008 000 88	Construcción 20 centros de día (marginados)	9.420	430	9.850	3.440	34,9%
009 000 88	Construcción varios (minorías étnicas)	10.947	(10.947)	0	0	–
701 000 89	Ayudas a LL. e I.S.F.L. Centros Servicio Social	60.359	16.749	77.108	77.108	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 313.1	178.998	184.398	363.396	376.987	103,7%

Cuadro 11

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa 315.1: Condiciones de trabajo y administración de relaciones laborales

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
006 000 88	Construcción nueva residencia tiempo libre. Valencia	20.000	0	20.000	20.000	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 315.1	20.000	0	20.000	20.000	100,0%

Cuadro 12

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO
Programa 413.1: Salud

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION DISPONIBLE 31-12-89	MODIFI-CACIONES 1990	DOTACION DEFINITIVA 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1990	GRADO EJECUCION
006 000 88	Centro de Salud Comunitaria. Torrent	30.000	(30.000)	0	0	–
011 000 88	Centro de Salud Comunitaria. Alzira	30.000	(30.000)	0	0	–
003 000 88	Centro de Salud Comunitaria. Benidorm	8.000	(327)	7.673	0	0,0%
004 000 88	Equip. de los Centros de Salud Comunitarios	2.927	0	2.927	2.927	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 413.1	70.927	(60.327)	10.600	2.927	27,6%

Cuadro 13

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

(En miles de pesetas)

PROGRAMA / CONSELLERIA	A 31 DE DICIEMBRE DE 1989 DOTACION DEFINITIVA	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
442.1 Protección del medio ambiente	2.500	2.500	100,0%
ADMINISTRACION PUBLICA	2.500	2.500	100,0%
431.1 Arquitectura y vivienda	694.159	650.187	93,7%
512.1 Infr. urb.,san. y abast. agua e infr. hidráulicas	1.348.562	1.279.584	94,9%
513.1 Infr. carreteras, conservación y explotación	1.427.600	1.575.288	110,3%
513.2 Infraestructura del transporte ferroviario	82.007	92.007	112,2%
514.1 Infr. explotación portuaria y actuaciones costa	53.356	44.736	83,8%
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRASPORTES	3.605.684	3.641.802	101.0%
422.3 Enseñanzas secundarias	239.298	238.619	99,7%
CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA	239.298	238.619	99,7%
531.1 Estructuras agrarias y zonas desfavorecidas	245.922	204.565	83,2%
542.2 Transferencia, innovación y tecnología agraria	0	0	–
AGRICULTURA Y PESCA	245.922	204.565	83,2%
722.1 Ordenación y promoción industrial y energética	0	0	–
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	0	0	–
313.1 Servicios sociales	363.396	376.987	103,7%
315.1 Condic. trabajo y adm. relaciones laborales	20.000	20.000	100,0%
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	383.396	396.987	103,5%
413.1 Salud	10.600	2.927	27,6%
SANIDAD Y CONSUMO	10.600	2.927	27,6%
TOTAL FCI DOTADO EN 1989	**4.487.400**	**4.487.400**	**100,0%**

Cuadro 14

4.4 Comentarios al grado de ejecución

El resumen general sobre el grado de ejecución a 31 de diciembre de 1990 de las inversiones financiadas con el FCI de 1989 se muestra en el cuadro 14.

El grado de ejecución global a la fecha indicada es del 100%. Sin embargo, un análisis más detallado de la ejecución a nivel de programas y proyectos concretos, pone en evidencia de nuevo situaciones que ya tuvieron lugar durante el ejercicio 1989 respecto al FCI de 1988, comentadas por esta Sindicatura en el informe de fiscalización correspondiente.

Al 31 de diciembre de 1990, figuran proyectos en los que los pagos computados a efectos del FCI superan las dotaciones, y, por el contrario, otros proyectos tienen computados pagos por importes inferiores a sus dotaciones, compensándose las diferencias de uno y otro signo.

Los proyectos que incluyen pagos superiores a sus dotaciones son los siguientes:

		Miles de pesetas		
Programa	Nº Proyecto	Dotación	Pagos	Diferencia
431.1	003 000 88	66.130	166.130	100.000
512.1	046 000 88	102.234	212.234	110.000
513.1	037 000 88	4.483	12.483	8.000
513.1	014 000 88	0	9.000	9.000
513.1	001 000 88	62.500	72.500	10.000
513.1	046 000 88	0	177.993	177.993
513.1	025 000 88	2.153	12.153	10.000
513.2	001 000 86	68.828	78.828	10.000
313.1	004 000 88	5.812	25.812	20.000
TOTALES		312.140	767.133	454.993

Si se dedujeran los excesos arriba indicados de los pagos computados, éstos se situarían en la cantidad de 4.032,4 millones de pesetas durante el ejercicio 1990, reduciéndose el índice de ejecución global en dicho ejercicio al 89,9%.

No obstante, con fecha 11 de enero de 1991 se han reajustado las dotaciones de los proyectos a efectos del FCI, mediante la aprobación del correspondiente expediente de modificación, situando de esta forma todas las dotaciones de acuerdo a los pagos computados.

4.5 Ejecución global del FCI de 1989

El cuadro 15, preparado por la Sindicatura de Cuentas a partir de la información rendida, muestra la ejecución global del FCI dotado en 1989, considerando los ejercicios de ejecución 1989 y 1990.

Los cuadros 16 a 18 son representaciones gráficas sobre los aspectos más importantes de este FCI.

Como se ha indicado en el apartado 4.1, la dotación del FCI de 1989 no ha tenido variación en términos absolutos en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, y ha quedado en 12.381,9 millones de pesetas, tal como se fijó inicialmente. Las modificaciones incorporadas han consistido en sustituciones de unos proyectos por otros, o bien en alteración de las dotaciones.

Las modificaciones aprobadas en el ejercicio 1989 constituyen redistribuciones de las dotaciones entre distintos programas de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que incrementan la dotación del programa "Infraestructura del transporte ferroviario" en 100 millones de pesetas y la del programa "Infraestructura urbana, saneamiento y abastecimiento de agua e infraestructuras hidráulicas" en 4,4 millones de pesetas, financiadas con disminuciones equivalentes en las dotaciones de los programas "Arquitectura y vivienda" e "Infraestructura de carreteras", respectivamente.

Como resultado de las modificaciones practicadas en el ejercicio 1990, la Conselleria de Administración Pública, que no disponía de dotaciones del FCI, las recibe por importe de 2,5 millones de pesetas. Se incrementan las dotaciones de la Conselleria de Agricultura y Pesca (239,2 millones de pesetas), de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social (184,4 millones de pesetas) y de la de Cultura, Educación y Ciencia (38,2 millones de pesetas). Estos incrementos se financian con disminuciones en las dotaciones de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (325,2 millones de pesetas), de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo (78,8 millones de pesetas) y de la de Sanidad y Consumo (60,3 millones de pesetas).

En cuanto a la distribución de los pagos en los dos ejercicios de referencia, el 63,8% han sido computados en 1989 y el 36,2% en 1990, aunque por la situación comentada en el apartado 4.4 anterior, la no consideración del exceso de pagos computados durante el ejercicio 1990 situaría el índice global de ejecución del FCI de 1989 al 31 de diciembre de 1990 en un 96,3%, y no en el 100% como se deduce de la información rendida a esta Sindicatura.

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

RESUMEN EJECUCION 1989 Y 1990

(En miles de pesetas)

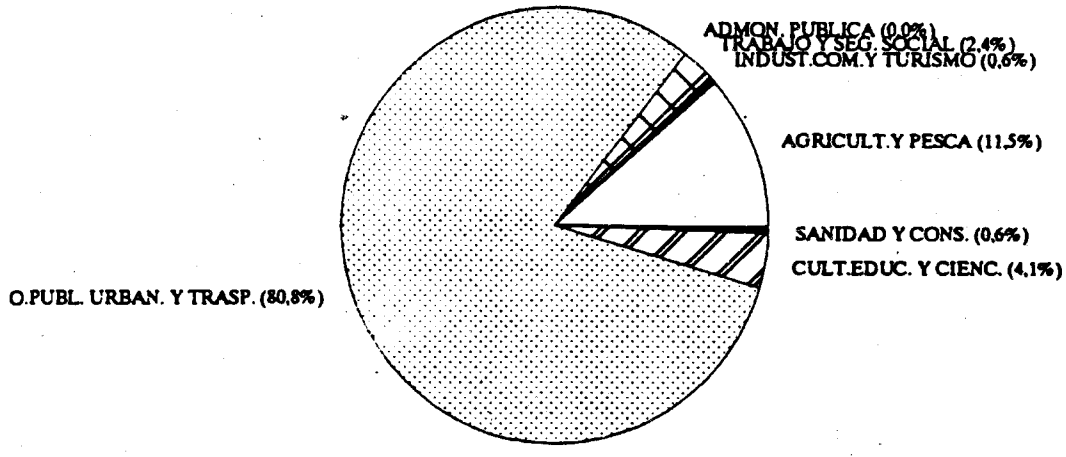
PROGRAMA/CONSELLERIA	DOTACION 1-1-89	MODIFICACIONES 1989	MODIFICACIONES 1990	MODIFICACIONES TOTAL	DOTACION 31-12-90	PAGOS ORDENADOS 1989	PAGOS ORDENADOS 1990	PAGOS ORDENADOS TOTAL	GRADO EJECUCION
442.1 Protección del medio ambiente	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	100%
ADMINISTRACION PUBLICA	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	100%
431.1 Arquitectura y vivienda	2.302.066	(100.000)	33.083	(66.917)	2.235.149	1.540.990	650.187	2.191.177	98%
512.1 Infr. urb.,san. y abast. agua e infr. hidráulicas	3.347.084	4.353	(366.149)	(361.796)	2.985.288	1.636.726	1.279.583	2.916.309	98%
513.1 Infr. carreteras, conservación y explotación	1.644.811	(4.353)	75.292	70.939	3.715.750	2.288.150	1.575.288	3.863.438	104%
513.2 Infraestructura del transporte ferroviario	530.406	100.000	(47.480)	52.520	582.926	500.920	92.007	592.927	102%
514.1 Infr. explotación portuaria y actuaciones costa	182.000	0	(19.946)	(19.946)	162.054	108.699	44.736	153.435	95%
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRASPORTES	10.006.367	0	(325.200)	(325.200)	9.681.167	6.075.485	3.641.801	9.717.286	100%
422.3 Enseñanzas secundarias	502.950	0	38.157	38.157	541.107	301.808	238.619	540.427	100%
CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA	502.950	0	38.157	38.157	541.107	301.808	238.619	540.427	100%
531.1 Estructuras agrarias y zonas desfavorecidas	1.392.681	0	245.922	245.922	1.638.603	1.392.681	204.565	1.597.246	97%
542.2 Transferencia, innovación y tecnología agraria	28.000	0	(6.700)	(6.700)	21.300	21.300	0	21.300	100%
AGRICULTURA Y PESCA	1.420.681	0	239.222	239.222	1.659.903	1.413.981	204.565	1.618.546	98%
722.1 Ordenación y promoción industrial y energética	78.750	0	(78.750)	(78.750)	0	0	0	0	–
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	78.750	0	(78.750)	(78.750)	0	0	0	0	–
313.1 Servicios sociales	282.225	0	184.399	184.399	466.624	103.227	376.987	480.214	103%
315.1 Condic. trabajo y adm. relaciones laborales	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	100%
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	302.225	0	184.399	184.399	486.624	103.227	396.987	500.214	103%
413.1 Salud	70.927	0	(60.328)	(60.328)	10.599	0	2.927	2.927	28%
SANIDAD Y CONSUMO	70.927	0	(60.328)	(60.328)	10.599	0	2.927	2.927	28%
TOTAL FCI DOTADO EN 1989	12.381.900	0	0	0	12.381.900	7.894.501	4.487.399	12.381.900	100%

Cuadro 15

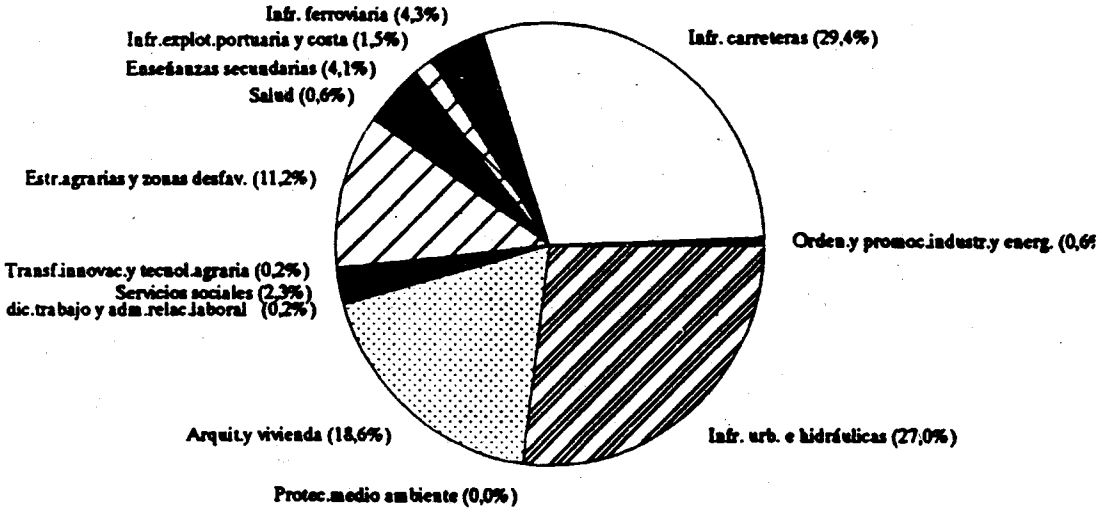
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

DISTRIBUCION DE LA DOTACION INICIAL

Por Consellerias



Por programas

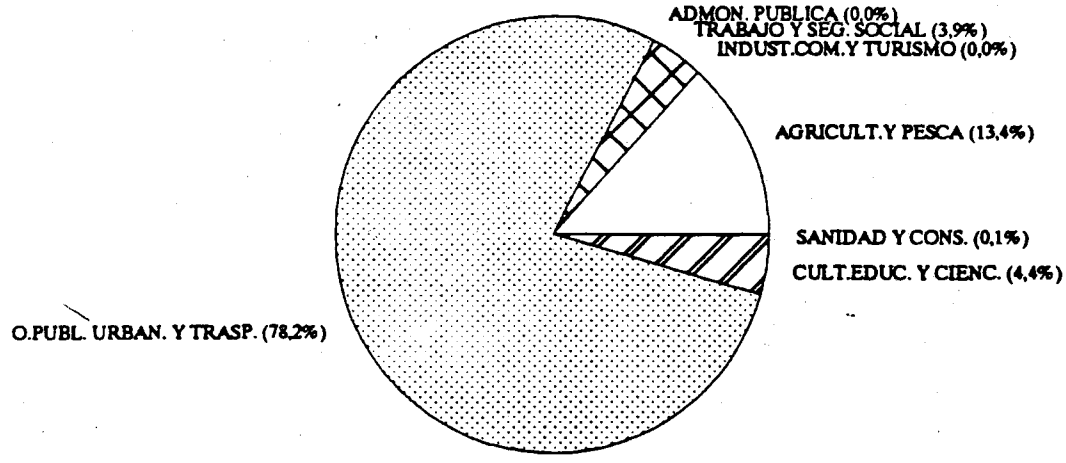


Cuadro 16

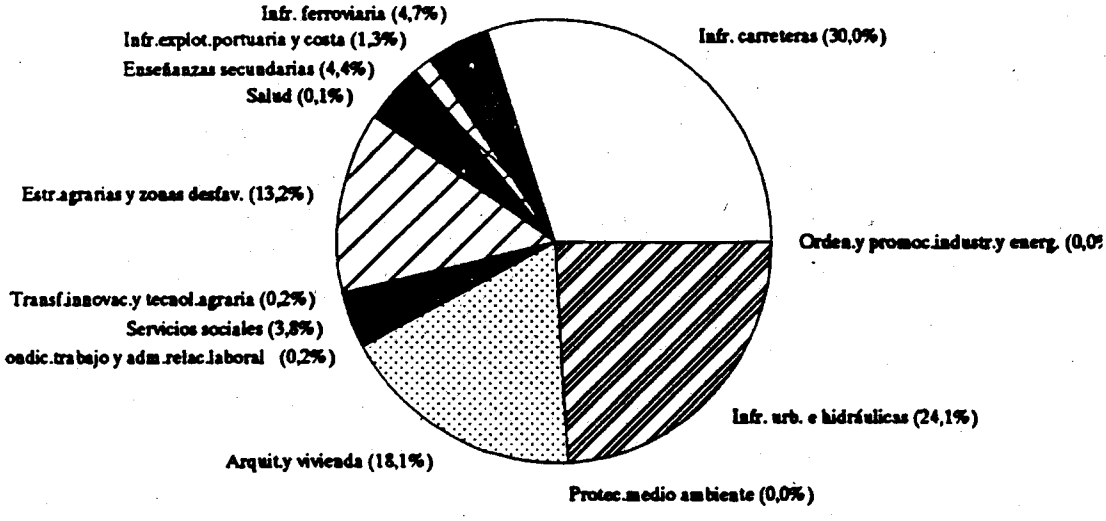
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

DISTRIBUCION DE LA DOTACION FINAL

Por Consellerias



Por programas

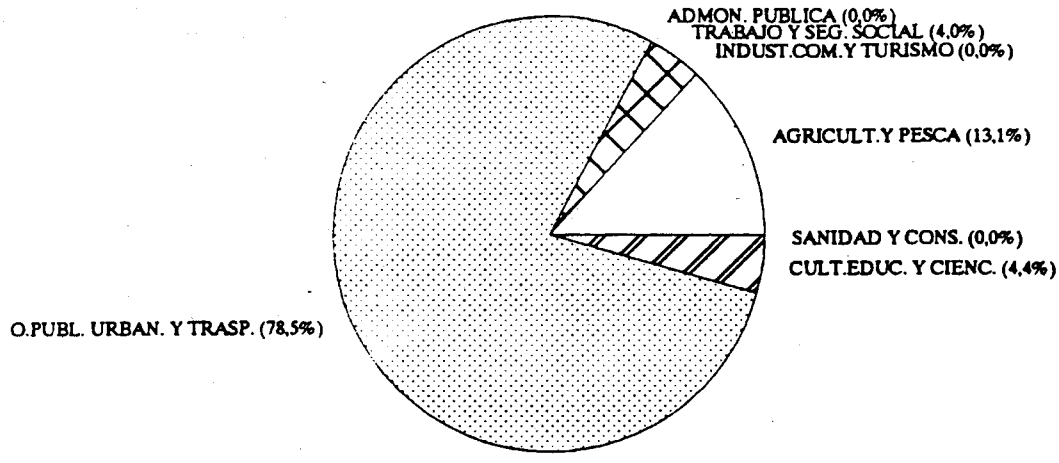


Cuadro 17

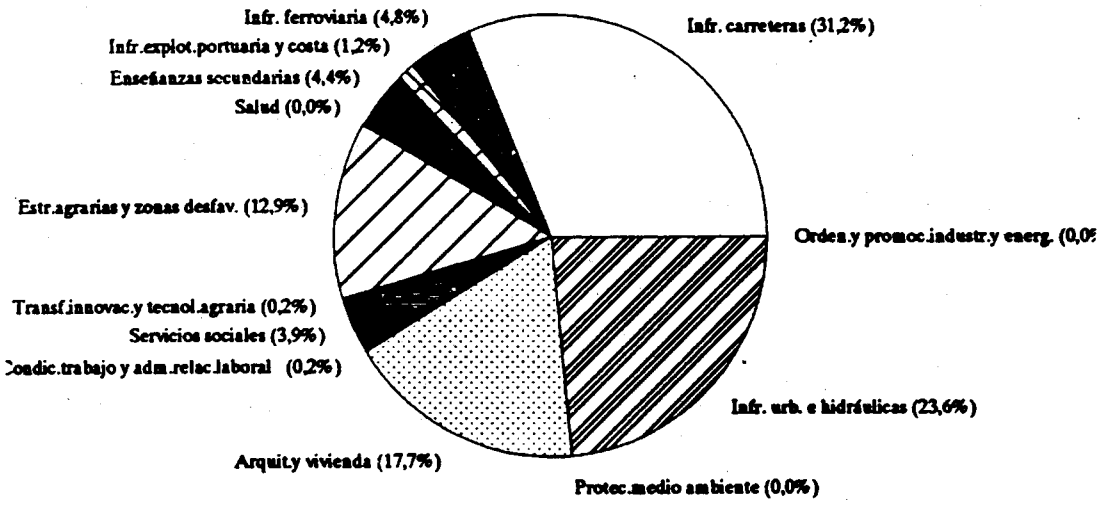
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989

DISTRIBUCION DE LOS PAGOS ORDENADOS DURANTE 1989 Y 1990

Por Consellerias



Por programas



Cuadro 18

4.6 Fondos solicitados por la Generalitat Valenciana a la Administración Central

En ejecución de los proyectos financiados con el FCI de 1989, la Generalitat Valenciana ha efectuado a la Administración Central las siguientes peticiones de fondos, según consta en las certificaciones remitidas al efecto:

	Millones de pesetas	%
En el año 1989	5.092,8	41,1%
En el año 1990	6.641,3	53,6%
En el año 1991	647,8	5,3%
TOTAL	12.381,9	100%

El detalle de las certificaciones realizadas a la Administración Central durante 1990 es el siguiente:

Fecha	Millones de pesetas
31-01-90	2.771,8
14-02-90	5,9
02-04-90	(79,2)
27-04-90	786,8
15-06-90	1.977,9
09-07-90	145,6
13-07-90	390,4
19-10-90	642,1
TOTAL	6.641,3

Al 31 de diciembre de 1990 se habían solicitado a la Administración Central fondos por importe de 11.734,1 millones de pesetas, que representan un 94,7% sobre la dotación del FCI de 1989 considerada por la Generalitat Valenciana, 12.381,9 millones de pesetas, que, como se ha comentado en apartados anteriores, no está reducida en el importe acordado por la Administración Central, 1.498,9 millones de pesetas. El análisis de los importes recibidos se efectúa en el apartado 6.2 del informe.

5. GRADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FCI DE 1990

5.1 Dotación inicial

Por el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 21 de febrero de 1990 se establece una nueva regulación del FCI a partir del ejercicio 1990, con carácter provisional en tanto no fuera revisado el sistema de financiación básica de las Comunidades Autónomas. Asimismo se fijan las dotaciones económicas a transferir a estas Comunidades.

El sistema establecido por el citado Acuerdo supone para ciertas Comunidades Autónomas una reducción en las dotaciones del FCI, y para otras su exclusión como perceptoras de dicho Fondo. Para equilibrar este hecho se crea la "Compensación Transitoria", como una fuente de financiación incondicionada de las Comunidades Autónomas al margen de la participación en los ingresos del Estado.

Los fondos asignados en 1990 a la Comunidad Valenciana constan de dos partidas: una corresponde a las dotaciones del FCI, que ascienden a 7.241,8 millones de pesetas, para su inversión en los proyectos acordados, y otra a la Compensación Transitoria, dotada con 7.379 millones de pesetas. Esta última rúbrica, que como se ha indicado anteriormente tiene el carácter de financiación incondicionada, debe hacerse efectiva a favor de la Comunidad Autónoma por doceavas partes mensuales. Por otra parte, la totalidad del FCI de la Comunidad Valenciana se gestiona directamente por la Administración Autonómica.

La dotación total por ambos conceptos asciende, por tanto, a la cantidad de 14.620,8 millones de pesetas, que figura en el capítulo 7, sección 33, del estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, a favor de la Comunidad Valenciana. Esta misma cifra figura como dotación inicial en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1990, dentro del capítulo 7 "Transferencias de Capital de la Administración del Estado", concepto 703, "Fondo de Compensación Interterritorial" (véase apartado 6.2).

El examen de la Sindicatura se ha realizado sobre los proyectos financiados con el FCI propiamente dicho, y no sobre la Compensación Transitoria debido a su carácter de financiación incondicionada.

La variación en la dotación del FCI del ejercicio 1990 respecto a la del ejercicio 1989 se muestra a continuación, en millones de pesetas:

	Dotaciones		Variación	
FCI Comunidad Valenciana	1989	1990	Importe	%
Administración Autonómica	12.381,9	7.241,8	-5.140,1	-41,5%
Administración Central	1.108,2	0	-1.108,2	-100%
Compensación Transitoria	0	7.379,0	7.379,0	100%
TOTALES	13.490,1	14.620,8	1.130,7	8,4%

Tanto el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes citado, como la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1990, incluyen como anexos una relación de 93 proyectos de inversión a financiar con el FCI de dicho ejercicio, que inicialmente se acuerdan entre las administraciones Estatal y Autonómica.

5.2 Modificaciones

Durante el ejercicio 1990 no han tenido lugar modificaciones presupuestarias sobre la dotación global del FCI de este ejercicio.

Han tenido lugar modificaciones que han afectado a los proyectos de inversión inicialmente acordados, habiendo consistido en sustituciones de proyectos y/o modificaciones sobre las consignaciones iniciales, aprobadas formalmente por el Conseller de Economía y Hacienda.

El número inicial de proyectos incluidos en el FCI fue de 93. De estos proyectos, un número de 74, con un presupuesto total de 6.610,9 millones de pesetas, no han sido modificados durante el ejercicio. Las modificaciones efectuadas han sido como sigue:

- 17 proyectos, con una dotación inicial de 521,2 millones de pesetas, han sido totalmente excluidos del FCI.
- 2 proyectos, con una dotación inicial de 109,7 millones de pesetas, han visto incrementada su dotación hasta 630,9 millones de pesetas.

El resumen de estas variaciones es el siguiente:

	01-01-90		31-12-90	
	Número	Dotación (MP)	Número	Dotación (MP)
Proyectos que no varían	74	6.610,9	74	6.610,9
Proyectos sustituidos	17	521,2	—	—
Proyectos modificados	2	109,7	2	630,9
TOTAL	93	7.241,8	76	7.241,8

Las modificaciones por programas han sido las siguientes:

Programas	Dotación 01-01-90	Dotación 31-12-90	Variación
Arquitectura y vivienda	1.658,4	1.246,5	(411,9)
Hidráulicas	1.435,2	1.391,4	(43,8)
Carreteras	2.163,1	2.093,9	(69,2)
Enseñanzas secundarias	101,0	625,9	524,9
Resto, que no varían	1.884,1	1884,1	0
TOTAL	7.241,8	7.241,8	0

Para dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley del FCI, la Dirección General de Economía comunicó, con fecha 19 de febrero de 1991, al Comité de Inversiones Públicas de la Administración Central, las modificaciones de proyectos del FCI practicadas.

5.3 Grado de ejecución de los proyectos en el ejercicio 1990

El grado de ejecución, al 31 de diciembre de 1990, de los proyectos de inversión competencia de la Generalitat Valenciana financiados con el FCI del ejercicio 1990, se muestra en los cuadros 19 a 27 (desglose de programas por proyectos) y 28 (resumen general por programas y Consellerias). Estos cuadros han sido preparados por la Sindicatura de Cuentas a partir de la información rendida a través de la Intervención General de la Generalitat Valenciana.

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 431.1: Arquitectura y vivienda

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFICACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
001 000 88	Adquisición de edificios y suelo	5.000	(5.000)	0	0	–
005 000 88	Construcción y reposic. edificios	90.109	0	90.109	90.109	100,0%
006 000 88	Estudios y redacción plan y normativa	8.744	(3.722)	5.022	5.022	100,0%
010 000 87	Constr. y reposición edificios Castellón CS–87/010	34.766	(34.766)	0	0	–
020 000 87	Constr. y reposición edificios Castellón CS–87/020	74.535	(74.535)	0	0	–
022 000 86	Constr. y reposición edificios Marines V–86/220	56.610	0	56.610	56.610	100,0%
030 000 86	Edificación 18 viviendas. Villavieja	3.725	0	3.725	3.725	100,0%
031 000 86	Construcción y reposición edificios Dolores	23.281	0	23.281	23.021	98,9%
042 000 88	A–86/560 69 viviendas Alicante terminación	61.804	0	61.804	58.716	95,0%
043 000 88	A–88/840 urbanización polígono Batoi	83.897	0	83.897	133.897	159,6%
044 000 88	A–88/840 urbanización Cantagallet	90.739	0	90.739	140.739	155,1%
045 000 88	A–88/810 Alcoi urbanización L'Arenal	110.984	0	110.984	110.984	100,0%
046 000 88	A–87/100 Alcoi actuación pca. Casco antiguo	9.500	(9.500)	0	0	–
060 000 85	Terminación 79 viviendas Benaguacil	66.645	0	66.645	66.645	100,0%
100 000 85	Constr. y reposición edificios Alcoi rehab. A–86/240	50.861	(50.861)	0	0	–
103 000 85	Constr. y reposición edificios Sagunto V–86/170	28.447	0	28.447	17.557	61,7%
107 000 85	Valencia C/ En Bou rehabilitación V–87/310	38.898	0	38.898	38.898	100,0%
110 000 89	Torrevieja A–90/040. 148 viviendas	10.000	(10.000)	0	0	–
120 000 89	Alicante A–89/AUT–010. 20 viviendas	70.000	(70.000)	0	0	–
130 000 83	Algemesí V–83/130	28.378	(28.378)	0	0	–
140 000 86	Constr. y reposición edificios Pedralba V–86/140	20.922	0	20.922	13.575	64,9%
141 000 89	Gabarda V–89/350. Urb. primaria	50.000	(50.000)	0	0	–
150 000 89	Benelxida V–89/450 Urb. primaria	50.000	(50.000)	0	0	–
151 000 86	Constr. y reposición edificios Xàtiva V–86/150	25.108	(25.108)	0	0	–
180 000 86	Constr. y reposición edificios Quesa V–86/180	2.366	0	2.366	2.366	100,0%
203 000 88	Alcoi urbanización Viaducto	37.044	0	37.044	37.044	100,0%
222 000 89	Act. áreas urbanas carac. est. (Valencia)	321.680	0	321.680	0	0,0%
250 000 86	Edificación 92 viviendas (Silla)	72.455	0	72.455	72.455	100,0%
350 000 86	Edificación 381 viviendas (Gabarda)	3.148	0	3.148	0	0,0%
356 000 87	Alcoi urbanización casco antiguo A–97/100	128.702	0	128.702	128.702	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 431.1	1.658.348	(411.870)	1.246.478	1.000.065	80,2%

Cuadro 19

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES

Programa 512.1: Infraestructura urbana,saneamiento y abastecimiento agua e infraestructura hidráulica

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
001 000 89	Depuradora de Requena	20.681	0	20.681	0	0,0%
024 000 88	Colector y planta depuradora. Alcalá de Chivert	29.851	0	29.851	0	0,0%
025 000 88	Emisario Benicarló	15.921	0	15.921	15.921	100,0%
026 000 88	Emisario Vinaroz	19.900	0	19.900	0	0,0%
031 000 88	Onteniente. Depuradora	84.938	0	84.938	84.938	100,0%
033 000 88	Camp del Turia. Saneamiento y depuración	83.292	0	83.292	83.292	100,0%
036 000 88	Saneamiento y depuración nucleos aislados	67.859	0	67.859	67.859	100,0%
038 000 88	Encauzamiento río Serpis. Gandía	39.800	0	39.800	5.616	14,1%
046 000 88	Encauzamiento de ramblas y barrancos	117.984	0	117.984	117.984	100,0%
053 000 88	Saneamiento Cañole. Dep. Canals y Alcudia	53.127	0	53.127	53.127	100,0%
056 000 88	Otras obras abastecimiento núcleos deficitarios	57.113	0	57.113	56.780	99,4%
057 000 88	Modificados y liquidaciones	50.957	0	50.957	150.957	296,2%
058 000 88	Asistencias técnicas	69.650	0	69.650	69.650	100,0%
061 000 88	Infraestructura ciclo hidr. Conv. C.M. l'Horta	94.400	0	94.400	94.400	100,0%
205 000 89	Elche. Infraestructura hidráulica	48.000	0	48.000	48.000	100,0%
206 000 89	Foia de Castalla, saneamiento	35.820	(35.820)	0	0	–
207 000 89	Abastecimiento en la provincia de Castellón	12.338	0	12.338	12.338	100,0%
209 000 89	Alcol. Obra de infraestructura hidráulica	7.960	(7.960)	0	0	–
222 000 89	Plan saneamiento Valencia	304.710	0	304.710	304.710	100,0%
246 000 86	Obras encauzam.y defensa zona Vega Baja S. y otras	81.590	0	81.590	0	0,0%
247 000 90	Dénia. Colector pluvial	79.600	0	79.600	0	0,0%
248 000 90	Peñíscola. Encauzamiento barranco Alborache	19.900	0	19.900	0	0,0%
249 000 90	Colector y depuradora Buñol y Alborache	19.900	0	19.900	0	0,0%
250 000 90	Abastecimiento Marina Baja	19.900	0	19.900	0	0,0%
	TOTAL PROGRAMA 512.1	1.435.191	(43.780)	1.391.411	1.165.572	83,8%

Cuadro 20

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 513.1: Infraestructura carretera, conservación y explotación

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
001 000 88	Eje vertebrador Castellón–Morella	14.869	0	14.869	4.869	32,7%
002 000 88	Eje vertebrador Alzira–Borriol	49.780	0	49.780	49.780	100,0%
003 000 88	Eje vertebrador Valencia–Ademuz	138.100	0	138.100	348.100	252,1%
006 000 87	Area Metropolitana Valencia (BEI)	89.604	0	89.604	26.959	30,1%
009 000 88	Area urbana de Castellón	14.357	(14.357)	0	0	–
010 000 88	Eje vertebrador 5 Valencia–Alcoi–Alicante	118.300	0	118.300	27.816	23,5%
011 000 88	Area metropolitana de Alicante	6.920	(6.920)	0	0	–
012 000 88	Area urbana de Elx	6.920	(6.920)	0	0	–
013 000 88	Acondicionamiento itinerarios básicos Castellón	131.756	0	131.756	131.756	100,0%
014 000 88	Acondicionamiento itinerarios básicos Valencia	29.118	0	29.118	29.118	100,0%
015 000 88	Itinerarios básicos provincia de Alicante	166.521	0	166.521	166.521	100,0%
016 000 88	Mejora red local Castellón	180.318	0	180.318	280.318	155,5%
017 000 88	Mejora red local Valencia	224.423	0	224.423	324.423	144,6%
018 000 88	Mejora red local Alicante	212.124	0	212.124	412.124	194,3%
020 000 88	Eje vertebrador 4 Almansa–Gandía	78.256	0	78.256	178.256	227,8%
025 000 88	Eje vertebrador Val.–Alcoi–Alacant. Xátiva–L'Olleria	79.670	0	79.670	129.670	162,8%
028 000 88	Itineraro básico Onda–Grao de Burriana	58.864	0	58.864	58.864	100,0%
037 000 88	Itinerario básico Elda–Monóvar–Pinoso	52.756	0	52.756	5.625	10,7%
038 000 88	Itinerario básico Aspe–Elx–Santa Pola	74.604	0	74.604	74.604	100,0%
042 000 88	Eje vertebrador 6 Alcoi–Torrevieja	30.502	0	30.502	30.502	100,0%
043 000 88	Mejora acceso comarcas interior. Red básica	41.040	(41.040)	0	0	–
044 000 88	Mejora acceso comarcas interior. Red local	52.765	0	52.765	52.765	100,0%
045 000 88	Asistencias técnicas	48.913	0	48.913	98.913	202,2%
046 000 88	Expropiaciones	102.238	0	102.238	302.238	295,6%
047 000 88	Modificados y liquidaciones	83.026	0	83.026	83.026	100,0%
053 000 89	Itinerario básico Ontiyent–Villena–Yecla	77.367	0	77.367	77.367	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 513.1	2.163.111	(69.237)	2.093.874	2.893.614	138,2%

Cuadro 21

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 513.2: Infraestructura del transporte ferroviario

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
010 000 88	Rehabilitación vías F.G.V.	110.000	0	110.000	110.000	100,0%
016 000 88	Ampliación metro Valencia	400.000	0	400.000	0	0,0%
	TOTAL PROGRAMA 513.2	510.000	0	510.000	110.000	21,6%

Cuadro 22

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 514.1: Infraestructura explotación portuaria y actuaciones costa

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
001 000 88	Nueva infraestructura portuaria	133.000	0	133.000	133.000	100,0%
002 000 88	Planeamiento de puertos	20.000	0	20.000	0	0,0%
006 000 88	Planeamiento de costas y playas	5.000	0	5.000	2.992	59,8%
	TOTAL PROGRAMA 514.1	158.000	0	158.000	135.992	86,1%

Cuadro 23

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA
Programa 422.2: Enseñanzas básicas

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
002 000 88	Equipamiento y constr. centros educación básicas	376.150	0	376.150	563.277	149,7%
	TOTAL PROGRAMA 422.2	376.150	0	376.150	563.277	149,7%

Cuadro 24

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA
Programa 422.3: Enseñanzas secundarias

(En miles de pesetas

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
001 000 88	Equip. y constr. centros educación secundarias	101.000	524.887	625.887	573.492	91,6%
	TOTAL PROGRAMA 422.3	101.000	524.887	625.887	573.492	91,6%

Cuadro 25

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA
Programa 422.6: Instalación y equipamiento Universidad

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
701 000 90	Equip. y const. centros enseñanzas universitarias	590.000	0	590.000	590.000	100,0%
	TOTAL PROGRAMA 422.6	590.000	0	590.000	590.000	100,0%

Cuadro 26

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

CONSELLERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa 313.1: Servicios sociales

(En miles de pesetas)

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION PROYECTO	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
002 000 88	Construcción 6 residencias de ancianos	65.610	0	65.610	0	0,0%
005 000 88	Construcción 5 residencias y otros (menores)	20.000	0	20.000	20.000	100,0%
014 000 88	Construcción Centro Social. Castellón	23.544	0	23.544	0	0,0%
015 000 89	Residencia minusválidos, menores y 3ª edad	130.846	0	130.846	180.846	138,2%
016 000 90	Adquisición material moder. administración gestión	10.000	0	10.000	8.942	89,4%
	TOTAL PROGRAMA 313.1	250.000	0	250.000	209.788	83,9%

Cuadro 27

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

(En miles de pesetas)

PROGRAMA / CONSELLERIA	DOTACION INICIAL	MODIFI-CACIONES	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	GRADO EJECUCION
431.1 Arquitectura y vivienda	1.658.348	(411.870)	1.246.478	1.000.065	80,2%
512.1 Infr. urb.,san. y abast. agua e infr. hidráulicas	1.435.191	(43.780)	1.391.411	1.165.572	83,8%
513.1 Infr. carreteras, conservación y explotación	2.163.111	(69.237)	2.093.874	2.893.614	138,2%
513.2 Infraestructura del transporte ferroviario	510.000	0	510.000	110.000	21,6%
514.1 Infr. explotación portuaria y actuaciones costa	158.000	0	158.000	135.992	86,1%
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRASPORTES	5.924.650	(524.887)	5.399.763	5.305.243	98,2%
422.2 Enseñanzas básicas	376.150	0	376.150	563.277	149,7%
422.3 Enseñanzas secundarias	101.000	524.887	625.887	573.492	91,6%
422.6 Instalación y equipamiento Universidad	590.000	0	590.000	590.000	100,0%
CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA	1.067.150	524.887	1.592.037	1.726.769	108,5%
313.1 Servicios sociales	250.000	0	250.000	209.788	83,9%
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	250.000	0	250.000	209.788	83,9%
TOTAL FCI DOTADO EN 1990	7.241.800	0	7.241.800	7.241.800	100,0%

Cuadro 28

5.4 Comentarios al grado de ejecución

El resumen general sobre el grado de ejecución, al 31 de diciembre de 1990, de las inversiones financiadas con el FCI de 1990 se muestra en el cuadro 28.

Los cuadros 29 a 31 son representaciones gráficas sobre los aspectos más importantes de este FCI.

El grado de ejecución global a la fecha indicada es del 100%. Sin embargo, un análisis más detallado de la ejecución a nivel de programas y proyectos concretos pone en evidencia una situación similar a la descrita en el apartado 4.4 anterior.

Los proyectos que incluyen pagos superiores a sus dotaciones son, en este caso, los siguientes:

		Miles de pesetas		
Programa	Nº Proyecto	Dotación	Pagos	Diferencia
431.1	043 000 88	83.897	133.897	50.000
431.1	044 000 88	90.739	140.739	50.000
512.1	057 000 88	50.957	150.957	100.000
513.1	003 000 88	138.100	348.100	210.000
513.1	016 000 88	180.318	280.318	100.000
513.1	017 000 88	224.423	324.423	100.000
513.1	018 000 88	212.124	412.124	200.000
513.1	020 000 88	78.256	178.256	100.000
513.1	025 000 88	79.670	129.670	50.000
513.1	045 000 88	48.913	98.913	50.000
513.1	046 000 88	102.238	302.238	200.000
422.2	002 000 88	376.150	563.277	187.127
313.1	015 000 89	130.846	180.846	50.000
TOTAL		1.796.631	3.243.758	1.447.127

Si se dedujeran los excesos arriba indicados de los pagos computados, éstos se situarían en la cantidad de 5.794,7 millones de pesetas durante el ejercicio 1990, quedando el índice de ejecución global en un 80%.

No obstante, con fecha 11 de enero de 1991 se han reajustado las dotaciones de los proyectos a efectos del FCI, mediante la aprobación del correspondiente expediente de modificación, situando de esta forma todas las dotaciones de acuerdo a los pagos computados.

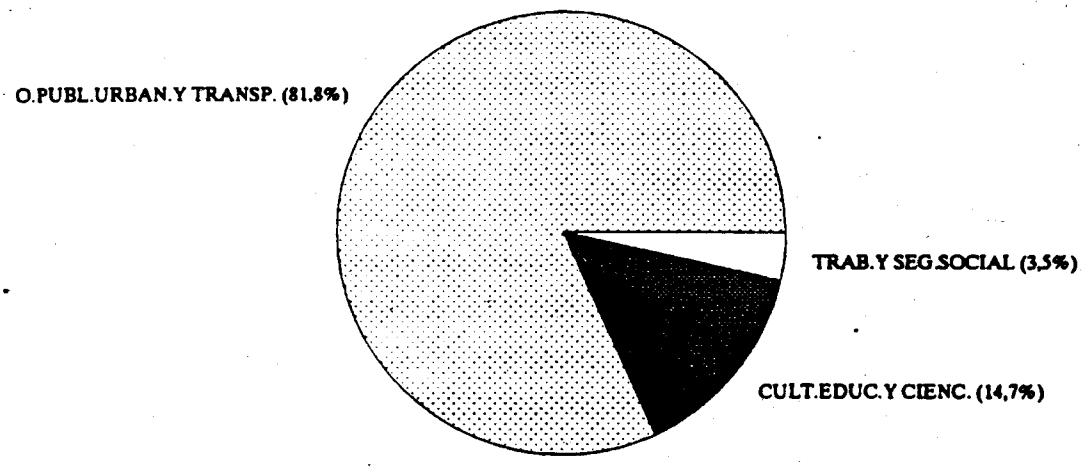
Una vez deducido el efecto de la situación comentada en los párrafos anteriores, sobre la imputación de pagos por importe superior a las dotaciones de proyectos concretos, la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia alcanza un grado de ejecución del 96,7%, la de Trabajo y Seguridad Social, del 63,9% y la de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, del 75,8%.

De los proyectos que integran el FCI de 1990, tan sólo uno figura como transferencias de capital, siendo el proyecto número 701.000.90, "Equipamiento y construcción centros enseñanzas universitarias", del programa 422.6 "Instalación y equipamiento Universidad", con una dotación al 31 de diciembre de 1990 de 590 millones de pesetas.

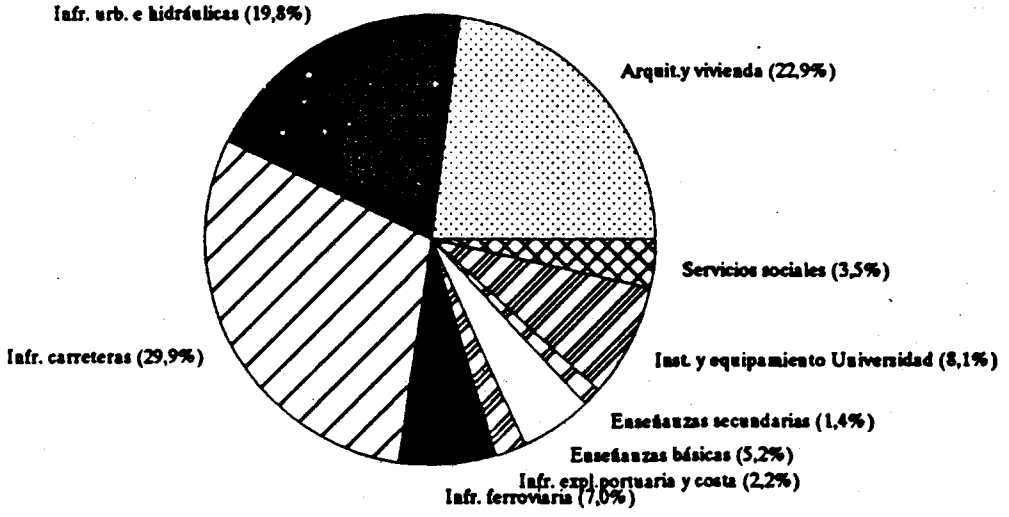
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

DISTRIBUCION DE LA DOTACION INICIAL

Por Consellerias



Por programas

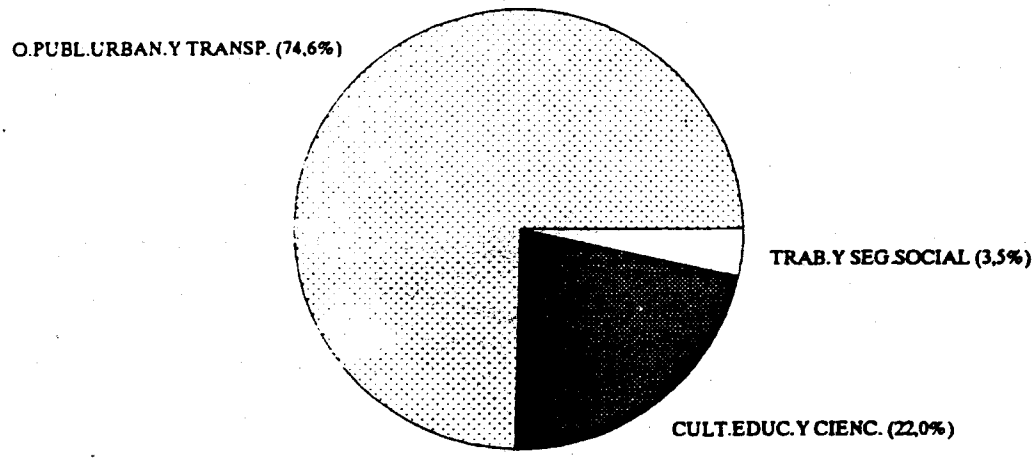


Cuadro 29

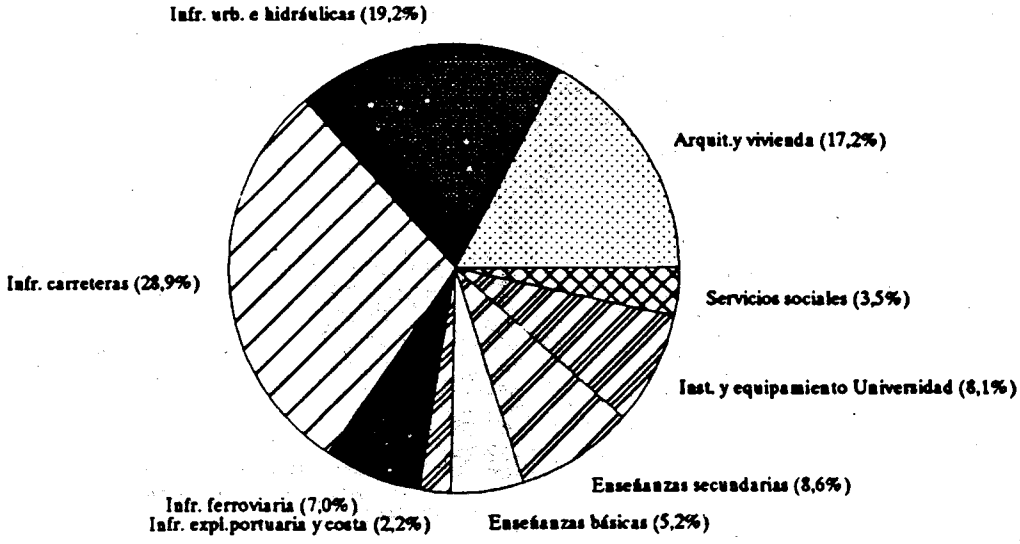
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

DISTRIBUCION DE LA DOTACION FINAL

Por Consellerias



Por programas

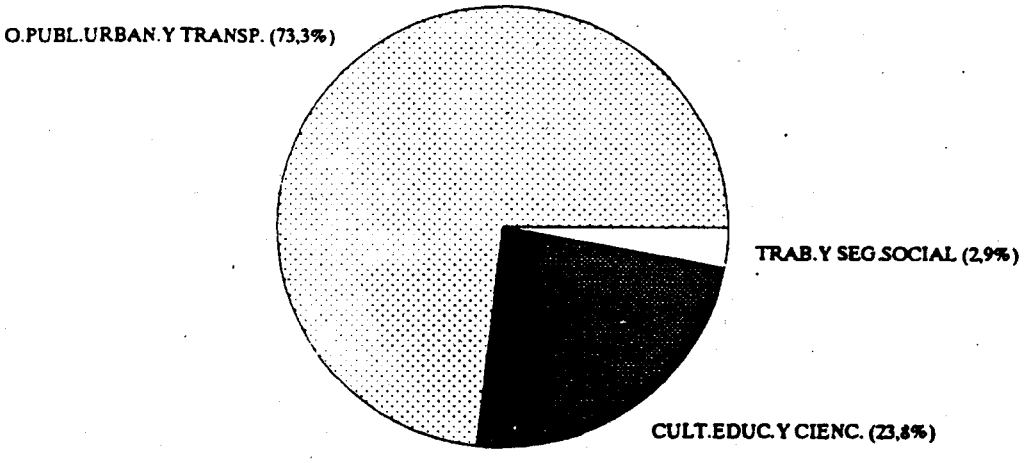


Cuadro 30

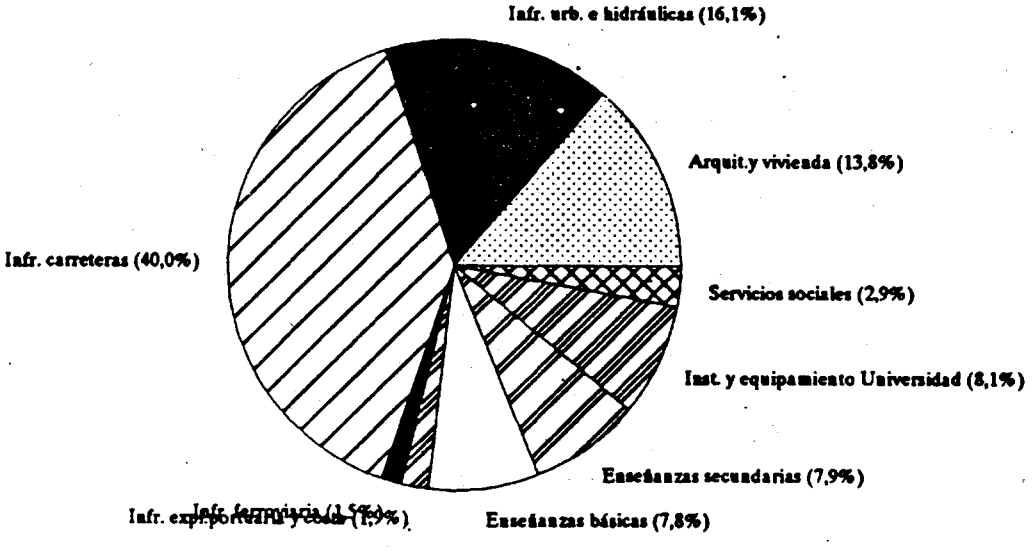
PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

DISTRIBUCION DE LOS PAGOS ORDENADOS

Por Consellerias



Por programas



Cuadro 31

5.5 Fondos solicitados por la Generalitat Valenciana a la Administración Central

Las solicitudes correspondientes a proyectos financiados con el FCI de 1990, remitidas por la Generalitat Valenciana a la Administración Central, han sido las siguientes:

	Millones de pesetas	%
En el año 1990	4.518,8	62,4%
En el año 1991	2.723,0	37,6%
TOTAL	7.241,8	100%

El detalle de las solicitudes enviadas a la Administración Central durante 1990 es el siguiente:

Fecha	Millones de pesetas
06-07-90	1.994,3
18-07-90	663,8
19-10-90	1.860,7
TOTAL	4.518,8

El desglose por programas se presenta en el cuadro 32, preparado por esta Sindicatura a partir de la información contenida en dichas solicitudes. Al 31 de diciembre de 1990 las peticiones de fondos representan un 62,4% de la dotación del FCI y de los pagos del ejercicio. Considerándose la salvedad indicada en el apartado 5.4 anterior, el porcentaje sería del 78% sobre los pagos del ejercicio.

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

FONDOS SOLICITADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL **(En miles de pesetas)**

PROGRAMA / CONSELLERIA	DOTACION FINAL	PAGOS ORDENADOS	FONDOS SOLICITADOS	% SOLICIT. s/ DOTACIÓN	% SOLICIT. s/ PAGOS
431.1 Arquitectura y vivienda	1.246.478	1.000.065	630.827	50,6%	63,1%
512.1 Infr. urb.,san. y abast. agua e infr. hidráulicas	1.391.411	1.165.572	974.707	70,1%	83,6%
513.1 Infr. carreteras, conservación y explotación	2.093.874	2.893.614	1.724.706	82,4%	59,6%
513.2 Infraestructura del transporte ferroviario	510.000	110.000	110.000	21,6%	100,0%
514.1 Infr. explotación portuaria y actuaciones costa	158.000	135.992	33.998	21,5%	25,0%
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRASPORTES	5.399.763	5.305.243	3.474.238	64,3%	65,5%
422.2 Enseñanzas básicas	376.150	563.277	282.113	75,0%	50,1%
422.3 Enseñanzas secundarias	625.887	573.492	156.472	25,0%	27,3%
422.6 Instalación y equipamiento Universidad	590.000	590.000	442.500	75,0%	75,0%
CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA	1.592.037	1.726.769	881.084	55,3%	51,0%
313.1 Servicios sociales	250.000	209.788	163.463	65,4%	77,9%
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	250.000	209.788	163.463	65,4%	77,9%
TOTAL FCI DOTADO EN 1990	7.241.800	7.241.800	4.518.785	62,4%	62,4%

Cuadro 32

5.6 Distribución territorial de la inversión

Según se ha indicado en el apartado 1.1 del informe, el artículo 158.2 de la Constitución dispone que el FCI se constituye con el fin de corregir desequilibrios económicos y hacer efectivo el principio de solidaridad. El artículo 6.1 de la Ley 29/1990 establece que los recursos del FCI se destinarán a financiar proyectos de inversión que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario.

La eficacia del FCI vendrá determinada por el grado con que se alcance su objeto de constitución, es decir, en la medida que contribuye de forma efectiva a corregir los desequilibrios económicos existentes en las Comunidades beneficiarias y, por extensión, en el Estado Español.

El objetivo de la fiscalización que, por mandato de la Ley del FCI, realiza la Sindicatura de Cuentas, es presentar un informe acerca del grado de ejecución de los proyectos que anualmente integran dicho Fondo (véase apartado 2 del informe).

El grado de ejecución de los proyectos es un indicador de la eficacia en la gestión del FCI, pero no es suficiente, por sí solo, para medir su eficacia en relación al objetivo que le confiere la Constitución. Se hace necesario disponer de indicadores adicionales que, de forma objetiva y lo más razonablemente posible, sean válidos para dicho cometido.

En este sentido, la Sindicatura de Cuentas considera de utilidad introducir elementos de análisis que proporcionen una aproximación más completa al examen de eficacia, aun siendo esta Institución consciente de las precauciones que habrán de ser observadas en los análisis que en este sentido se realicen.

Como punto de partida, la Sindicatura de Cuentas ha solicitado a la Intervención General de la Generalitat Valenciana la distribución territorial en la Comunidad Valenciana de las inversiones que se realizan con cargo al FCI, información que de acuerdo con la LOFCA debe ser rendida anualmente por los órganos gestores.

El cuadro 33 ha sido preparado por la Sindicatura de Cuentas a partir de la información rendida por la IGGV, siendo los aspectos más significativos que de ésta se desprenden los siguientes:

*Se presenta provincializada un 55,3% de la inversión del FCI de 1990, suponiendo una restricción al análisis no disponer de una territorialización más completa.

*Los programas que gestiona la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (un 74,6% del total), son los que mayor distribución provincial contemplan, un 73,8%, cuyo destino ha sido como sigue:

· Un 55,1% en la provincia de Valencia.

· Un 32,7% en la provincia de Alicante.

· Un 12,2% en la provincia de Castellón.

*Los programas que gestiona la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (un 22,0% del total), no están desagregados por destino provincial, por lo que no pueden ser considerados en este análisis territorial.

*Situación similar a la anterior se produce en el programa gestionado por la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social (un 3,4% del Fondo), ya que tan sólo un 9,4% del mismo figura concretado en la provincia de Castellón.

Teniendo en cuenta las circunstancias comentadas, se va a considerar sólamente a continuación los importes que del FCI figuran concretados provincialmente, para su comparación con los siguientes índices:

- Población de derecho en la Comunidad Valenciana en el año 1990 (fuente: IVE, Anuari Estadístic).

- Población activa de la Comunidad Valenciana en el cuarto trimestre de 1990 (fuente: IVE, Anuari Estadístic).

- Valor Añadido Bruto al coste de los factores en el año 1987 (fuente: IVE, Anuari Estadístic).

El siguiente cuadro recoge los datos citados anteriormente:

Provincias	% FCI	% Población de derecho	% Población activa	% V.A.B.
Valencia	54,75	55,36	52,86	56,88
Alicante	32,50	33,01	35,19	30,10
Castellón	12,75	11,63	11,95	13,02
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LA INVERSION

(Pesetas en miles)

PROGRAMA / CONSELLERIA	DOTACION A 31-12-90	ALICANTE		CASTELLON		VALENCIA		SIN TERRITORIALIZAR	
		INVERSION	% s/ TOTAL	INVERSION	% s/ TOTAL	INVERSION	% s/ TOTAL	INVERSION	% s/ TOTAL
431.1 Arquitectura y vivienda	1.246.478	536.451	43,0%	3.725	0,3%	611.171	49,0%	95.131	7,6%
512.1 Infr. urb.,san. y abast. agua e infr. hidráulicas	1.391.411	229.090	16,5%	97.910	7,0%	700.848	50,4%	363.563	26,1%
513.1 Infr. carreteras, conservación y explotación	2.093.874	536.507	25,6%	385.807	18,4%	481.245	23,0%	690.315	33,0%
513.2 Infraestructura del transporte ferroviario	510.000	0	0,0%	0	0,0%	400.000	78,4%	110.000	21,6%
514.1 Infr. explotación portuaria y actuaciones costa	158.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	158.000	100,0%
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRASPORTES	5.399.763	1.302.048	24,1%	487.442	9,0%	2.193.264	40,6%	1.417.009	26,2%
422.2 Enseñanzas básicas	376.150	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	376.150	100,0%
422.3 Enseñanzas secundarias	625.887	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	625.887	100,0%
422.6 Instalación y equipamiento Universidad	590.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	590.000	100,0%
CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA	1.592.037	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.592.037	100,0%
313.1 Servicios sociales	250.000	0	0,0%	23.544	9,4%	0	0,0%	226.456	90,6%
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	250.000	0	0,0%	23.544	9,4%	0	0,0%	226.456	90,6%
TOTAL FCI DOTADO EN 1990	**7.241.800**	**1.302.048**	**18,0%**	**510.986**	**7,1%**	**2.193.264**	**30,3%**	**3.235.502**	**44,7%**

Cuadro 33

6. PERCEPCION DE LAS DOTACIONES DEL FCI

6.1 Regulación legal

La primera Ley del FCI, 7/1984, preveía en su artículo 10.2 el siguiente mecanismo de percepción de las dotaciones del FCI:

"Tanto los órganos gestores de la Administración Central como las Comunidades Autónomas, de conformidad con los créditos cuya gestión tengan, respectivamente, encomendadas, dispondrán de la tesorería correspondientes a los mismos por cuartas partes, efectuándose los oportunos libramientos dentro de los quince primeros días de cada trimestre por el servicio mencionado en el apartado anterior, previa solicitud en que se relacionen los datos relativos a las obras ejecutadas, adquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas en el trimestre inmediatamente anterior. Del importe correspondiente a cada libramiento trimestral se deducirán las cantidades transferidas en el trimestre inmediato anterior que no hayan sido utilizadas para satisfacer inversiones efectivas."

Tal como se ha puesto de manifiesto en anteriores informes de esta Sindicatura, la sentencia 63/1986, de 21 de mayo, del Tribunal Constitucional, declaraba la inconstitucionalidad del citado artículo 10.2 de la Ley 7/84, basándose en la vulneración del principio de autonomía, el cual exige que las actuaciones de la Administración Autonómica no sean controladas por la Administración del Estado. La

sentencia número 183/88, de 13 de octubre, de este mismo Tribunal, declara la inconstitucionalidad de la siguiente parte del artículo 10.2:

> *"...donde se relacionarán los datos relativos a las obras ejecutadas, adquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas en el trimestre inmediatamente anterior. Del importe correspondiente a cada entrega trimestral se deducirán las cantidades transferidas en el trimestre inmediatamente anterior que no hayan sido utilizadas para satisfacer inversiones efectivas."*

Del contenido de ambas sentencias se deducía una mayor facilidad para las Administraciones Autonómicas, en tanto en cuanto no sería necesario presentar certificación detallada a la Administración Central para que esta transfiriera la dotación del Fondo, aunque sí sería necesaria la solicitud previa de la transferencia por parte de la Administración Autonómica.

En la práctica, según se ha venido comentando en informes anteriores, las sentencias del Tribunal Constitucional no han tenido incidencia alguna en el proceso de percepción de las dotaciones del FCI, ya que la Administración Central continuó exigiendo, para remitir los fondos, que la Administración de la Generalitat Valenciana cumplimentase certificaciones con las mismas formalidades requeridas con anterioridad a las mencionadas sentencias, rechazando las que no cumplían dichos requisitos, con las consecuencias descritas en informes anteriores.

La nueva Ley del FCI, 29/1990, contempla, tal como se ha comentado en el apartado 1.1 del presente informe, un nuevo mecanismo de transferencia de los fondos por parte de la Tesorería de la Hacienda Central a las Haciendas Autonómicas, señalando en el apartado 4 del artículo 7 que para percibir los recursos del FCI, con arreglo a las estipulaciones de los apartados 2 y 3 del mismo artículo, será suficiente con que las Comunidades Autónomas procedan a la petición de los mismos al órgano gestor de los créditos en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Durante el ejercicio 1990, la Generalitat Valenciana ha efectuado peticiones a la Administración Central por importe de 4.518,8 millones de pesetas que suponen un 62,4% de la dotación total (véase apartado 5.5). Estas peticiones se acompañan de certificaciones detalladas por proyectos. Sin embargo, aunque estas peticiones se han efectuado en los meses de julio y octubre de 1990, al 31 de diciembre de dicho año no se había recibido ninguna transferencia de la Administración Central en relación a las peticiones indicadas (véase apartado 6.2).

Las certificaciones por proyectos son preparadas por la Dirección General de Economía, que las propone a la Intervención General para su aprobación y remisión a la Administración Central.

6.2 Ingresos del FCI en el ejercicio 1990

La Liquidación del Estado de Ingresos del Presupuesto de la Generalitat Valenciana del ejercicio 1990, en lo que respecta a los ingresos por FCI, se muestra en el cuadro 34, preparado por esta Sindicatura a partir de los registros contables de la Conselleria de Economía y Hacienda.

Al capítulo "0" (Resultas) del Estado de Ingresos se han incorporado las cantidades pendientes de cobro por FCI de ejercicios anteriores, que ascienden a 10.347,2 MP. De esta cantidad, se ha cobrado durante el ejercicio un importe de 6.281,0 MP, lo que supone el 60,7%, figurando como pendientes de cobro 4.066,1 MP del FCI de 1989. La cifra de derechos pendientes de cobro incluye 1.498,9 MP, que según se ha comentado en el apartado 4.1, podrían no ser recibidos de la Administración Central, con el consiguiente impacto negativo en el presupuesto de la Generalitat Valenciana.

Respecto al FCI de 1990, la previsión definitiva que se contempla en el concepto presupuestario asciende a 14.620,8 MP, que comprende los siguientes conceptos según se ha comentado en el apartado 5.1:

	Millones de pesetas
FCI de 1990	7.241,8
Compensación Transitoria	7.379,0
Total	14.620,8

Los ingresos líquidos de 1990, 6.149,2 MP, corresponden íntegramente a la Compensación Transitoria, suponiendo diez de las doce mensualidades de 1990.

Por tanto, no ha tenido lugar en el ejercicio 1990 ningún cobro relativo al FCI de 1990, figurando la totalidad pendiente de recibir al 31 de diciembre de dicho año. Tal como se ha comentado en el apartado 5.5, las peticiones de fondos efectuadas por la Generalitat Valenciana durante 1990 han ascendido a 4.518,8 MP.

La gestión del FCI dotado en 1990 ha tenido el siguiente impacto en la liquidación del Presupuesto de la Generalitat Valenciana de 1990:

FCI DOTADO EN 1990	Millones de pesetas
Sobre el resultado presupuestario:	
- Derechos reconocidos	7.241,8
Menos:	
- Obligaciones reconocidas	7.241,8
Efecto	0
Sobre la tesorería:	
- Ingresos	0
Menos:	
- Pagos	(7.241,8)
Efecto negativo	(7.241,8)

EJECUCION DE LOS FCI EN EL EJERCICIO 1990

LIQUIDACION DEL ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS POR FCI

(En millones de pesetas)

CAPITULOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFI-CACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS LIQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
FCI 1988	0,0	612,5	612,5	612,5	612,5	0,0
FCI 1989	0,0	9.734,6	9.734,6	9.734,6	5.668,5	4.066,1
CAPITULO 0: RESULTAS	0,0	10.347,2	10.347,2	10.347,2	6.281,0	4.066,1
FCI 1990	12.699,0	1.921,8	14.620,8	14.620,8	6.149,2	8.471,6
CAPITULO 7:TRANSF.DE CAPITAL	12.699,0	1.921,8	14.620,8	14.620,8	6.149,2	8.471,6
TOTAL INGRESOS	12.699,0	12.269,0	24.968,0	24.968,0	12.430,2	12.537,8

Cuadro 34

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

FCI dotado en 1989

a) Al 31 de diciembre de 1990 la ejecución de este Fondo, según la información rendida a la Sindicatura de Cuentas, ha alcanzado a nivel global el 100%. Sin embargo, tal como se ha puesto de manifiesto en los apartados 4.4 y 4.5, existen proyectos cuyos pagos computados a efectos del FCI superan las dotaciones a financiar con dicho Fondo en 455 millones de pesetas, habiéndose aprobado el ajuste en las dotaciones con fecha 11 de enero de 1991. El grado de ejecución global de los proyectos que integran este Fondo, considerando los ejercicios 1989 y 1990 y teniendo en cuenta la circunstancia indicada, quedaría situado en un 96,3%.

Se recomienda que se tomen las medidas necesarias para que los estados de ejecución de los proyectos al cierre de cada ejercicio muestren la situación de acuerdo con las modificaciones aprobadas durante el mismo.

b) Al 31 de diciembre de 1990 la Generalitat Valenciana ha solicitado de la Administración Central el reembolso de importes que suponen un 94,7% de la dotación del Fondo, completando el 5,3% restante durante 1991, por lo que el ritmo de solicitudes puede calificarse de razonable.

c) Sin embargo, al 31 de diciembre de 1990 queda pendiente de cobro por la Generalitat Valenciana un importe de 4.066,1 millones de pesetas, que supone un 32,8% de la dotación. Esta última cifra incluye, tal como se indica en el apartado 6.2, un importe de 1.498,9 millones de pesetas cuyo cobro está sujeto a la resolución del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana a los Acuerdos del Consejo de Ministros, que reducen la asignación del FCI a la Comunidad Valenciana en el importe indicado.

FCI dotado en 1990

d) Al 31 de diciembre de 1990, primer año de gestión de este Fondo, el grado de ejecución es, según la información rendida, del 100%. Sin embargo, y al igual que respecto al FCI de 1989, existen proyectos cuyos pagos computados superan las dotaciones a financiar con el FCI, por importe de 1.447,1 millones de pesetas, lo que sitúa el grado de ejecución en un 80% (véase apartado 5.4).

e) Al 31 de diciembre de 1990, la Generalitat Valenciana, de acuerdo con las estipulaciones previstas en el artículo 7 de la Ley 29/1990, ha solicitado de la Administración Central el reembolso de un 62,4% de la dotación del FCI de 1990, completándose el 37,6% restante durante el ejercicio 1991. Sin embargo, durante el ejercicio 1990 no se han recibido los fondos solicitados, habiéndose cobrado 6.149,2 millones de pesetas por el concepto de Compensación Transitoria.

f) Se recomienda que se tomen las medidas necesarias para que se complete la información anual sobre el destino territorial de las inversiones del FCI en la Comunidad Valenciana (véase apartado 5.6).

Control sobre el grado de ejecución de los proyectos

g) Según se ha indicado en el apartado 1.2 del informe, la Ley del FCI establece que, para facilitar el control parlamentario, se lleve una contabilidad analítica de los costes imputables a cada proyecto y las unidades físicas de realización más significativas.

Tal como se ha venido poniendo de manifiesto en informes anteriores de esta Sindicatura, la contabilidad de la Generalitat no suministra información sobre los proyectos de inversión individualizados correspondientes al FCI, y las operaciones relativas a las dotaciones de estos proyectos no se consideran independientemente. Esta circunstancia es particularmente significativa porque en general las dotaciones del FCI financian sólo parcialmente el presupuesto total de los distintos proyectos individuales; el hecho de que en los registros contables no exista constancia de los asientos o transacciones que corresponden a dotaciones de dicho FCI, dificulta la realización de un adecuado seguimiento de las mismas.

Debido a lo anterior, la información que sobre la situación de los proyectos del FCI elabora la Dirección General de Economía resulta del análisis y desarrollo por ésta de los datos de los registros contables desagregados. Sería conveniente que contablemente pudiera efectuarse un seguimiento de los diferentes proyectos asignados al FCI.

Valencia, 9 de Septiembre de 1992

EL SINDICO MAYOR

Vicente Montesinos Julve

DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 1990

Realizado el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 1990, función que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo por delegación de las Cortes Generales de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución; vistos los artículos 132, 133, 135 y 136 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que regulan la formación, estructura y contenido de dicha Cuenta, cuyo ámbito se extiende exclusivamente a las de la Administración General del Estado, Organismos autónomos de carácter administrativo, y Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo; vistos el Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria y la Ley 5/1990, de 29 de junio, procedente de aquél, dictados con motivo de la prórroga de los presupuestos del ejercicio 1989, la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, y demás disposiciones aplicables, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento del art. 10 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo, y del art. 33 de la Ley 7/88, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta el art. 13 de la citada Ley Orgánica, oído el Fiscal y consideradas las alegaciones del Gobierno, dicta la siguiente Declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 1990, cuya fundamentación y desarrollo se contiene en los distintos epígrafes del apartado I de la parte "Sector Público Estatal" del Informe Anual, a los que, entre paréntesis, se irá haciendo referencia.

DECLARACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1990

La Cuenta General del Estado (CGE) correspondiente al ejercicio 1990, con las excepciones que se indican posteriormente, presenta la estructura y contenido establecidos en las disposiciones que le son de aplicación, y es coherente internamente y con la documentación complementaria que le sirve de fundamento. El reflejo en la CGE de la actividad económico-financiera llevada a cabo en el ejercicio por el Estado y sus Organismos autónomos, así como el de su situación patrimonial, se halla condicionado por las salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y contables que se expresan en los siguientes apartados.

EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS GENERALES DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

1.- La Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 1990 se ha rendido a este Tribunal con una demora de 21 días sobre el plazo legalmente establecido (apartado I.1.1).

2.- No se han incluido en los estados anuales agregados las cuentas de los 19 Organismos autónomos, 4 de carácter administrativo (OAA) y 15 de carácter comercial, industrial, financiero o análogo (OACIF), que se relacionan a continuación: Agencia Española de Cooperación Internacional; Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero; Mutualidad General Judicial; Universidad Internacional Menéndez Pelayo; Trabajos Penitenciarios; Patronato de Casas Militares (Ejército); Patronato de Casas Militares (Aire); Junta del Puerto de Algeciras; Junta del Puerto de Alicante; Junta del Puerto de Melilla; Junta del Puerto de Pasajes; Junta del Puerto de Santander; Junta del Puerto de Tarragona; Confederación Hidrográfica del Duero; Agencia Nacional del Tabaco; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias; Escuela de Organización Industrial; Administración Turística Española e Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Aunque la importancia de los créditos iniciales de estos Organismos respecto al total de los del subsector correspondiente es baja -1,3% en el caso de los OAA, y 6,8% en el de los OACIF-, en número representan el 10,8 y el 22% respectivamente (4 sobre 37 y 15 sobre 68). Con posterioridad a la rendición de la Cuenta General del Estado, se han recibido las cuentas de 11 de estos Organismos, comprobadas de conformidad por la Intervención General de la Administración del Estado, que están siendo examinadas por este Tribunal fuera del ámbito propio de esta Declaración definitiva (apartado I.1.1).

3.- Las cuentas de 7 Organismos Autónomos no debieran haberse integrado en los estados anuales agregados, al presentar graves defectos formales en su confección. Estos Organismos son: Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario; Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar; Fondo de Explotación de Servicios de la Cría Caballar y Remonta; Gerencia de Infraestructura de la Defensa; Servicio de Vigilancia Aduanera; Agencia del Aceite de Oliva y Confederación Hidrográfica del Norte de España.

De no haberse agregado estas cuentas, los porcentajes expresados en el punto 2 anterior pasarían a ser el 9,5 y el 7% de los créditos iniciales, y el 27 y el 23,5% del número de los Organismos integrables en la Cuenta General del Estado (apartado I.1.1).

4.- Falta la debida concordancia entre los datos aportados en la Cuenta General del Estado por las entidades pagadoras y perceptoras, relativos a operaciones de transferencias internas, sin que se presenten estados de conciliación que aclaren y justifiquen las discrepancias. Las causas más frecuentes de estos desajustes contables son, principalmente: la deficiente información mutua entre las Entidades implicadas en estas operaciones, unida a cierta indefinición normativa sobre la cuantía y el momento en que, una vez aprobados los créditos de transferencias, nace la obligación de pago y el correlativo derecho de cobro; la incorrecta clasificación contable de estos gastos e ingresos por algunas Entidades; y, en fin, la aplicación ocasional de criterios contables diferentes por pagadores y perceptores.

La diferencia global neta entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por tal concepto (1.184.677 millones de pesetas) y los correlativos derechos (1.189.013 millones de pesetas) se eleva a 4.336 millones, cifra que resulta de la compensación de diferencias positivas y negativas, desagregadas por Organismos, que ascienden a 6.901 y 11.237 millones de pesetas, respectivamente.

En el mismo sentido, la diferencia neta entre obligaciones contraídas pendientes de pago en 31/12/90 (261.490 millones) y los recíprocos derechos (217.162 millones), se eleva a 44.328 millones de pesetas y resulta de la compensación de diferencias positivas y negativas, desagregadas en la forma indicada, por importes de 54.097 y 9.769 millones de pesetas, respectivamente.

Aunque estas discrepancias contables son muy numerosas, destacan por su significación o importancia cuantitativa, por un lado, las derivadas de la contracción de derechos en el ejercicio por el Centro de Gestión Catastral, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Instituto de la Juventud, por importes de 5.453, 1.460, 253 y 199 millones de pesetas, respectivamente, por transferencias del Estado que no llegaron a reconocerse por éste y, por otro, la originada por la falta de

registro en las Cuentas del Estado, como derechos reconocidos pendientes de cobro a 31/12/90, de 50.000 millones de pesetas, correspondientes a una transferencia a su favor del Instituto Nacional de Empleo (INEM) pendiente de pago, que el Organismo tiene correctamente contabilizada desde 1987, año en que se produjo la operación (apartado I.1.2).

5.- Sigue sin el previsto desarrollo reglamentario el Título II "De los Presupuestos" del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria (TRLGP) a pesar de los notables inconvenientes que esta situación supone. Por otra parte, la presentación de la liquidación presupuestaria en las cuentas rendidas sin su desagregación, al menos, a nivel de créditos vinculantes, constituye una insuficiencia de la información contable (apartados I.1.3.1. c y d).

6.- En las modificaciones de los créditos iniciales, las que en términos netos ascienden a 3.359.902 millones de pesetas, se han observado los siguientes hechos y prácticas que no se ajustan a las normas aplicables en la materia:

a) La figura modificativa de ampliación de créditos se utiliza, frecuentemente, para fines que no son acordes con su naturaleza. Así:

- Se han aprobado, al menos, 18 expedientes de ampliación, por importe de 40.994 millones de pesetas, destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores que por ser previsibles debieran haber sido incluidas en los créditos iniciales.

- En 115 créditos los remanentes anulados (1.415.985 millones) superan el 25% de las correspondientes ampliaciones (2.400.163 millones), llegando incluso en algunos de ellos a sobrepasar el importe de las mismas. Ello pone de manifiesto que no existían, en todo o en parte, las obligaciones reconocidas que constituyen el fundamento legal de tales modificaciones o, caso de existir, que no fueron contraídas en cuentas como procedía.

Por otra parte, se viene atribuyendo en las leyes de presupuestos de forma taxativa, tal y como prevé el art. 66 del TRLGP, la condición de ampliables a algunos créditos destinados a la cobertura de determinados gastos (contrato-programa, remuneraciones a agentes mediadores independientes, publicidad y propaganda, y organización y desarrollo de elecciones a órganos de representación de funcionarios), cuyo origen y cuantía no deriva ni de la recaudación de ingresos afectados ni de "obligaciones específicas del respectivo ejercicio, según disposiciones con rango de ley", requisitos, uno u otro, que vienen exigidos por el citado art. 66 del TRLGP, junto con el de que se hagan explícitos los créditos en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado. Por esta vía puede quedar despojada de eficacia la reserva de ley establecida en la Constitución para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y para la contracción de obligaciones financieras (arts. 66.2 y 133.4 de la Constitución), habida cuenta de la habilitación a la Administración para dotar los créditos que dan cobertura a estos gastos, sin que el nacimiento de las respectivas obligaciones derive de una ley sustantiva ni su importe venga limitado por la de Presupuestos por haberse considerado ampliables los correspondientes créditos. Bien es cierto que el art. 10 de la LPGE ha establecido este año una limitación global al reconocimiento de obligaciones, pero dicho artículo, tal y como ha sido aplicado por la Administración, no ha supuesto un verdadero límite a la realización del gasto, según se expresa en el punto siguiente (apartado I.1.3.2.a).

b) En no pocas ocasiones, se aprueban modificaciones, en las que se fundamentan ulteriores incorporaciones de remanentes, en fechas en que se carece de tiempo para consumir el crédito y, en otras, las incorporaciones se acuerdan para atender gastos ya realizados, lo que supone desconocimiento de las exigencias del art. 73 del TRLGP, que sólo admite estas operaciones cuando por causas justificadas no se hubieran podido realizar los gastos en el ejercicio precedente (apartado I.1.3.2.c).

c) Al margen de las excepciones admitidas en la ley se han efectuado transferencias negativas por importe de 9.713 millones en créditos previamente incrementados con otras positivas e, inversamente, transferencias positivas por un importe de 10.992 millones en créditos previamente disminuidos con otras negativas (apartado I.1.3.2.b).

EN RELACIÓN A LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

7.- No se han aplicado al presupuesto de gastos determinadas obligaciones originadas en el ejercicio que ascienden, en conjunto, a 353.122 millones de pesetas y, por el contrario, se han imputado a él obligaciones generadas en años anteriores por un importe global de 165.506 millones. En consecuencia, los gastos presupuestarios reflejados en la Cuenta de la Administración General del Estado -13.662.712 millones de pesetas- se encuentran incorrectamente minorados en 187.616 millones de pesetas.

Por otra parte, se considera que se ha incumplido el art. 10 de la LPGE, ya que del cálculo realizado por este Tribunal, teniendo en cuenta las obligaciones no aplicadas al presupuesto a las que se hace referencia en el párrafo anterior, se deduce que se ha superado el límite global fijado en dicho artículo (apartados I.2.1 y I.2.1.1.A)

8.- No se han aplicado al presupuesto de ingresos determinados derechos del ejercicio por importe de 25.650 millones de pesetas, mientras que se han aplicado a él 13.633 millones que se habían originado en años anteriores. En consecuencia, los ingresos presupuestarios que recoge la Cuenta de la Administración General del Estado -15.003.009 millones de pesetas- se encuentran incorrectamente disminuidos en 12.017 millones de pesetas (apartado I.2.1.1.B).

9.- El superávit de gestión presupuestaria del ejercicio -1.340.297 millones de pesetas-, que resulta de la compensación del déficit por operaciones no financieras (1.153.720 millones) y del superávit por operaciones financieras (2.494.017 millones), debería disminuirse en 175.599 millones de pesetas como efecto neto de las anomalías contables relativas a gastos e ingresos que se han puesto de manifiesto en los puntos 7 y 8 precedentes (apartado I.2.1.2).

10.- A 31/12/90 permanecían sin aplicar a presupuesto obligaciones originadas en 1990 y en ejercicios anteriores por un importe de 989.864 millones de pesetas, de los que 254.679 corresponden a inversiones del Ministerio de Defensa con cargo a préstamos del Federal Financing Bank; 136.052 a anticipos del Banco de España al Tesoro Público por gastos de emisión de deuda pública y aportaciones a Organismos Internacionales; 128.750 a transferencias a favor del Instituto de Crédito Oficial (ICO); 76.011 a relaciones financieras con la CEE; 76.020 a transferencias a Ayuntamientos; 59.884 a cuotas sociales; y los 258.468 millones restantes a otros gastos presupuestarios.

Asimismo, a 31/12/90 permanecían sin aplicar a presupuesto derechos originados en 1990 y en ejercicios anteriores que se elevan a 320.214 millones de pesetas, de los que 128.600 corresponden a un préstamo

concedido a la Seguridad Social vencido y no reembolsado; 117.701 a beneficios de emisión de moneda metálica; 50.000 a transferencias de capital a favor del Estado contraídas por el INEM; y los 23.913 millones restantes a otros ingresos presupuestarios (apartado I.2.1.3).

Los gastos e ingresos referidos en los dos párrafos anteriores deberán, obviamente, ser aplicados a liquidaciones presupuestarias de ejercicios posteriores al de 1990, que, asimismo, soportarán: la financiación de los déficit de RENFE desplazados a ejercicios futuros, por importe de 131.265 millones de pesetas; los intereses devengados y no vencidos a 31/12/90 de Letras y Pagarés del Tesoro, por 665.352 millones de pesetas; y las devoluciones de IRPF e IVA, por 126.400 millones; partidas sobre las que se vuelve en el punto 13 de esta Declaración, en relación con su incidencia en los resultados de ejercicios posteriores a 1990 (apartado I.2.1.4).

11.- En el balance de situación integral del Estado a 31/12/90, cuyo importe -excluidas cuentas de orden y control presupuestario- asciende a 13.918.525 millones de pesetas, destacan, al margen de la repercusión que en el mismo tienen algunos de los defectos puestos de manifiesto en puntos anteriores, las siguientes anomalías contables:

a) No se han cumplido las reglas 31 y 32 de la Instrucción de contabilidad del inmovilizado no financiero de la Administración del Estado que disponen el cargo de las cuentas de "Patrimonio entregado al uso general" y "Patrimonio", por el importe de las infraestructuras y bienes que hayan sido entregados al uso general y por el de las inversiones militares que hayan entrado en funcionamiento (apartado I.2.2.1.A.b).

Como consecuencia, la agrupación contable de "Inversiones públicas", con un saldo a 31/12/90 de 4.938.145 millones de pesetas, se encuentra sobrevalorada, al menos, en el importe que haya sido entregado al uso general o puesto en funcionamiento. Esta sobrevaloración es especialmente significativa en la cuenta "Inmovilizado material pendiente de clasificar hasta 1.985", que sustituye a la denominada en el ejercicio anterior "Inmovilizado material de dominio público pendiente de clasificar hasta 1.985" y presenta un saldo a 31/12/90 de 3.149.507 millones de pesetas (apartado I.2.2.1.A.2).

b) El inmovilizado inmaterial, que según el balance de situación a 31/12/90 se eleva a 107.799 millones de pesetas, no ha sido objeto de amortización. Por otra parte, recoge partidas que tienen la consideración de gastos corrientes por naturaleza indebidamente capitalizados, entre los que se encuentran 7.866 millones de pesetas correspondientes a obligaciones reconocidas del Programa STAR, presupuestadas y contabilizadas como inversiones reales, cuando por la naturaleza de las operaciones se trata, propiamente, de subvenciones, y 5.735 millones, que no llegaron a materializarse al corresponder a pagos a justificar que se reintegraron, sin que hayan sido objeto de corrección en el ejercicio (apartado I.2.2.1.A.3).

c) El saldo de las cuentas "Acciones con cotización oficial" y "Acciones sin cotización oficial", que a 31/12/90 asciende a 314.038 millones de pesetas, ha sido objeto de regularización en el ejercicio como consecuencia de la entrada en vigor de la Instrucción de contabilidad de la Cartera de Valores de la Administración del Estado. No obstante, las acciones de Tabacalera S.A. se han revalorizado en, al menos, 6.838 millones de pesetas más que lo que les correspondería de acuerdo con los criterios fijados en la citada Instrucción (I.2.2.1.B.1).

d) El saldo de las cuentas representativas de préstamos a medio y largo plazo, que a 31/12/90 asciende a 1.510.628 millones de pesetas, incluye 318.235 millones concedidos al Consorcio de Compensación de Seguros en el periodo 1984-1990 para su entrega a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que, a pesar de su concesión a título de préstamo, constituyen realmente pérdidas asumidas por el Estado (apartado I.2.2.1.B.2).

e) En la cuenta de inmovilizado financiero "Instituto de Crédito Oficial", con un saldo a 31/12/90 de 1.004.637 millones de pesetas, se incluyen 192.073 millones relativos a dotaciones al Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo (FAD); 21.504, a préstamos "Gobierno a Gobierno" y 112.665, a aportaciones al patrimonio del ICO. Esta inclusión se considera incorrecta porque la referida cuenta no es representativa de la auténtica y variada naturaleza de las operaciones a que se refieren las dos primeras partidas señaladas en las que el ICO es un mero gestor por cuenta del Tesoro, ni del carácter de las aportaciones al ICO que suponen gastos firmes para el Estado regularizables, por tanto, con cargo a resultados (apartado I.2.2.1.B.3).

f) El balance no recoge 2.000 millones de pesetas correspondientes al importe aplazado por la venta de las acciones de INTELHORCE, ni 3.107 millones correspondientes a la enajenación de inversiones reales del Estado, en la rúbrica de "Créditos por enajenación de inmovilizado" (I.2.2.1.B.4).

g) La cuenta "Bancos e Instituciones de crédito" presenta un saldo deudor a 31/12/90 de 968.540 millones de pesetas que debería incrementarse en 24.164 millones, importe agregado de determinadas cuentas del Tesoro en el Banco de España, que no se encuentran incluidas en la CGE.

Por otra parte, de la información obtenida a requerimiento de este Tribunal, se deduce que existen otras cuentas bancarias de titularidad estatal que tampoco aparecen incluidas en la CGE, entre las que se encuentran las de fondos para adquisiciones de material y servicios (FAMS) y de intereses, abiertas en el extranjero a nombre de diversas Agregadurías Militares, cuyos saldos a 31/12/90 ascendían a 12.272 y 9.087 millones de pesetas, respectivamente. Al margen de su falta de registro contable, se han producido otros incumplimientos del TRLGP relacionados con estas cuentas según se pone de manifiesto en el apartado III.9 del Informe Anual (I.2.2.1.E).

h) No aparecen recogidos en el balance de situación, y concretamente en la agrupación "Deudas a corto plazo", la deuda vencida de Tabacalera, S.A. frente al Banco de España por importe de 21.461 millones de pesetas, asumida por el Estado en virtud de la Ley 38/85, de 22 de noviembre, así como los anticipos efectuados por el Banco de España para suscripción, participación, contribución y cuotas en Organismos internacionales de desarrollo, que ascienden a 106.319 millones de pesetas (apartado I.2.2.2.D.5).

12.- La cuenta de resultados del ejercicio presenta un saldo deudor (pérdidas) de 648.846 millones de pesetas, deducido de la agregación de resultados corrientes del ejercicio (447.785 millones), resultados extraordinarios (96.594 millones), modificación de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores (83.488 millones), y resultados de la cartera de valores (20.979 millones), sobre los que se realizan las siguientes observaciones:

a) Las pérdidas corrientes del ejercicio presentadas en cuentas -447.785 millones de pesetas- se habrían visto incrementadas en 159.406

millones de pesetas si no se hubieran producido, entre otros de menor importancia, los defectos contables expresados anteriormente o en 55.300 millones si además se hubiesen periodificado los intereses de letras y pagarés del Tesoro, así como las devoluciones del IRPF e IVA (apartado I.2.3.1.A).

b) Los resultados extraordinarios incluyen 70.037 millones de pesetas de pérdidas, correspondientes a la regularización de la cartera de valores. Dicha regularización debió de hacerse, exclusivamente, por importe de 57.495 millones de pesetas, de los que 14.136 millones corresponden a resultados de la cartera de valores no contabilizados en ejercicios anteriores (apartado I.2.3.1.B).

c) Los resultados de la cartera de valores incluyen 21.580 millones de pesetas de pérdidas correspondientes a la venta, en 1990, de la totalidad de las acciones propiedad del Estado de HYTASA, S.A. e IMEPIEL, S.A., por un importe de 200 millones de pesetas, tras haberse procedido al desembolso de sendas ampliaciones de capital en el mismo ejercicio, por importe de 4.300 y 8.500 millones de pesetas, respectivamente. Se considera que, por esta circunstancia temporal, dichos importes deberían haber sido considerados como resultados corrientes del ejercicio, más que como resultados de la cartera de valores (apartado I.2.3.1.C).

13.- Las partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o incorrectamente aplicadas en 31/12/90 -a las más significativas de las cuales se ha hecho referencia en los puntos anteriores- que habrán de regularizarse en ejercicios posteriores a 1990, supondrán un cargo neto en las cuentas de resultados de la Administración General del Estado de 629.950 millones de pesetas, cifra a la que si se añaden los 665.352 millones correspondientes a los intereses de letras y pagarés del Tesoro devengados a la indicada fecha y pendientes de vencimiento y los 126.400 millones de las devoluciones del IRPF e IVA trasladadas a 1990, pasaría a ser realmente de 1.421.702 millones de pesetas; todo ello al margen de la carga futura por el desplazamiento temporal de la financiación estatal de los déficit de RENFE, por importe de 131.265 millones de pesetas y de la regularización contable de algunas partidas de balance, especialmente de los préstamos que se consideran incobrables, a que se hace referencia en el punto 11.d) anterior (apartado I.2.3.2).

EN RELACIÓN A LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

14.- Las cuentas de muchos Organismos presentan defectos formales, tales como falta de remisión de algunos documentos preceptivos, incorrecciones y falta de uniformidad de alguna de las partes que componen el cuadro de financiamiento anual e insuficiente aclaración de las causas que motivan las modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores. Se singularizan, por la mayor importancia de sus desviaciones de la Instrucción de Contabilidad aplicable, los OAA: Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario; Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar; Fondo de Explotación de Servicios de la Cría Caballar y Remonta; Gerencia de Infraestructura de la Defensa; Servicio de Vigilancia Aduanera; Agencia del Aceite de Oliva; cuyas cuentas no deberían haberse incluido en los estados anuales agregados sin la corrección previa de los defectos contenidos en las cuentas por ellos rendidas.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la fiscalización específica llevada a cabo por este Tribunal sobre el INE, se considera que la cuenta rendida por el Organismo no representa la imagen fiel de su situación patrimonial a 31/12/90 (apartado I.3).

15.- En relación con las obligaciones y derechos reconocidos en el ejercicio que ascienden, respectivamente, a 1.852.531 y 2.045.131 millones de pesetas, así como sobre los pendientes de reconócer o reconocidos en exceso hasta 31/12/90 por los Organismos autónomos administrativos, las observaciones fundamentales son las siguientes:

- A 31/12/90 se encontraban registrados dentro de cuentas extrapresupuestarias pendientes de aplicar a presupuesto en el INEM, gastos corrientes por importe de 577.232 millones de pesetas, que corresponden casi en su totalidad a prestaciones sociales propias de su actividad. De dichos gastos, 217.514 millones son imputables al ejercicio y los restantes a ejercicios anteriores (apartado I.3.1.1.A.1).

- Se han aplicado al presupuesto corriente del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) prestaciones satisfechas en ejercicios anteriores que ascienden a 3.687 millones de pesetas. Por otra parte, este Organismo ha rendido sus cuentas sin incluir la liquidación definitiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que supone no recoger 8.364 millones de pesetas de cuotas líquidas a favor del Organismo (apartado I.3.1.1.A.2).

- El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) ha tratado extrapresupuestariamente la adquisición y el reembolso de sus inversiones financieras a corto plazo, presentando unos saldos a 31/12/89 y 31/12/90 de 11.502 y 12.762 millones de pesetas, respectivamente, y mantiene como deudores extrapresupuestarios sin aplicar a presupuesto gastos por importe de 2.317 millones (apartado I.3.1.1.A.3).

- El INE tiene una deuda con la Seguridad Social pendiente de contabilizar y aplicar a presupuesto por importe de 1.876 millones de pesetas, de los que 1.178 corresponden a 1989 y 698, a 1990 (apartado I.3.1.1.A.4).

- Este último Organismo autónomo y el Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributaria contraen en el ejercicio 1.460 y 5.453 millones de pesetas respectivamente, por transferencias del Estado, que, según lo indicado en el punto 4 anterior, éste no reconoce en cuentas (apartado I.3.1.1.B.1).

- La Gerencia de Infraestructura de la Defensa y el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial recogen como derechos reconocidos y, por tanto, aplican a presupuesto en el ejercicio, cobros aplazados a ejercicios posteriores por importe de 9.992 y 175 millones de pesetas, respectivamente (apartado I.3.1.1.B.2).

16.- De lo expuesto en el punto anterior se deduce que:

a) Los resultados agregados de gestión presupuestaria de los Organismos aquí considerados correspondientes al ejercicio 1990, que según las cuentas rendidas son positivos y ascienden a 192.600 millones de pesetas, se encuentran incorrectamente incrementados en 226.107 millones, y en consecuencia, si no se hubiese incurrido en los defectos de imputación presupuestaria señalados, serían negativos por importe de 33.507 millones (apartado I.3.1.2).

b) Las partidas de gasto e ingreso pendientes de imputar al presupuesto o imputadas en exceso han supuesto un incorrecto incremento de los resultados de gestión presupuestaria agregados y acumulados hasta 31/12/90, de 603.126 millones de pesetas, cuya regularización deberá ser soportada por ejercicios posteriores a 1990 (apartado I.3.1.3).

c) El remanente de tesorería conjunto de estos Organismos a 31/12/90, que según los importes figurados en cuentas asciende a 752.099 millones de pesetas, habría pasado a ser realmente de 148.973 millones si no existiesen partidas de gasto e ingreso pendientes de regularización (apartado I.3.1.4).

17.- La previsión y utilización del remanente de tesorería por algunos Organismos ha sido incorrecta, toda vez que 23 de ellos consignan en su presupuesto de ingresos como previsión inicial 26.806 millones de pesetas frente a una cifra real de 154.033 millones, si bien posteriormente utilizan para financiar modificaciones de crédito otros 59.011 millones.

Estas prácticas producen excedentes de capital circulante no justificados en unos Organismos que, atendida su naturaleza, deben presentar una situación financieramente equilibrada. Por otra parte, estos excedentes permanecen en los Organismos, a pesar de que, para facilitar precisamente su transferencia al Estado, las leyes de presupuestos han dado el carácter de ampliables a los correspondientes créditos (apartado I.3.1.4).

18.- El balance de situación agregado de los Organismos autónomos administrativos, que a 31/12/90 -excluidas cuentas de orden y control presupuestario- asciende a 1.580.012 millones de pesetas, presenta, además de los defectos derivados de las anomalías contables puestas de manifiesto en los puntos anteriores, los que se indican a continuación:

a) De los 34 Organismos que en 31/12/90 presentan saldo en sus cuentas de inmovilizado material e inmaterial, no dotan amortizaciones 19, cuyos activos amortizables a la indicada fecha representan aproximadamente un 75% de los del subsector reflejados en cuentas (apartado I.3.2.1.A.a).

b) La inadecuada clasificación presupuestaria como inversiones de determinados créditos es causa de algunas distorsiones contables, por cuanto hay Organismos que, atendiendo a la naturaleza real del gasto, no activan justificadamente partidas imputadas al capítulo 6 de su presupuesto, mientras que otros, siguiendo el principio general de capitalización del movimiento de dicho capítulo, activan algunas partidas incluidas en el mismo que son realmente gastos corrientes (apartado I.3.2.1.A.a).

c) Varios Organismos no recogen adecuadamente, en todo o en parte, su inmovilizado material: Así, el Centro de Estudios Constitucionales valora el inmueble, que utiliza como sede, en el importe simbólico de 1 pta.; el Fondo de Atenciones Generales del Servicio Geográfico del Ejército y el Instituto Nacional del Consumo no reflejan contablemente los edificios que ocupan y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo no incluye los inmovilizados cuya adquisición fue anterior a 1987 (apartado I.3.2.1.A.b).

d) El Consejo Superior de Deportes tiene recogido en cuentas, como inmovilizado material, todos los gastos realizados con cargo al capítulo 6º de su presupuesto, aunque en múltiples casos la titularidad no sea suya, por lo que la operación sería aplicable a su cuenta de resultados y no una inversión activable en el balance. El inmovilizado del Organismo asciende a 31/12/90 a 12.442 millones de pesetas y carece del oportuno inventario (apartado I.3.2.1.A.c).

e) El INE presenta una cuenta de inmovilizado inmaterial con un saldo a 31/12/90 de 7.993 millones de pesetas, de los que 3.233 millones corresponden a nóminas de personal y al menos 600 millones no se pueden imputar a proyecto alguno. La Jefatura de Tráfico activa como inmovilizado inmaterial en 1990 un importe de 1.019 millones de pesetas, de los que 927 millones corresponden a los gastos de la campaña de divulgación de seguridad vial que debieron ser aplicados a su cuenta de resultados. El Instituto Nacional del Consumo mantiene sin movimiento desde 1987, como inmovilizado inmaterial, 119 millones de pesetas de los que al menos 82 millones son costes de edición de folletos o de publicación en medios de comunicación, que no deberían estar activados (apartado I.3.2.1.A.d).

f) El activo ficticio del agregado de los OAA, que asciende a 150.612 millones de pesetas, corresponde en su totalidad a los "gastos a cancelar" de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, por las inversiones realizadas en los ejercicios 1988, 1989 y 1990. Este importe no ha sido objeto de baja alguna por cesión a sus destinatarios con cargo a la cuenta de "Subvenciones de capital recibidas", que presenta un saldo a 31/12/90 de 186.376 millones de pesetas, comprensivo de las recibidas en idéntico período; por ello, ninguna de las dos cuentas anteriormente citadas son representativas, de acuerdo con la significación dada a las mismas por su plan contable: bienes en curso pendientes de transmisión y subvenciones pendientes de utilizar o utilizadas en bienes pendientes de transmitir (apartados I.3.2.1.A.f y I.3.2.2.B).

g) Los saldos de las cuentas de relación del INEM con la Administración General del Estado y con la Tesorería General de la Seguridad Social presentan importantes discrepancias cuantitativas que no han podido ser aclaradas (apartados I.3.2.1.B y I.3.2.2.C).

19.- La cuenta agregada de resultados del ejercicio de los Organismos aquí considerados presenta un saldo acreedor de 44.731 millones de pesetas, sobre el que se realizan las siguientes observaciones:

a) Los resultados corrientes del ejercicio, que son positivos y ascienden, según las cuentas rendidas, a 52.492 millones de pesetas, se encuentran indebidamente incrementados en 213.757 millones, como consecuencia, principalmente, de la incidencia en ellos de las anomalías contables puestas de manifiesto en el punto 15 anterior, y de las que se indican seguidamente:

- La contabilización por FOGASA, como ingresos del ejercicio, de 4.322 millones de pesetas, correspondientes a amortización de deuda pública.

- La aplicación en el ejercicio por el Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa, como ingresos corrientes, de 846 millones de pesetas ya registrados el año anterior, que se produce al corregir de forma inadecuada un error contable previo.

La corrección del importe señalado, sin tener en cuenta la falta de amortización expresada en el punto 18 a) anterior, convertiría en negativos los resultados corrientes del ejercicio por importe de 161.265 millones de pesetas (apartado I.3.3.1.A).

b) La cuenta de "modificación de obligaciones y derechos de ejercicios anteriores" presenta un saldo deudor (pérdidas) de 3.835 millones de pesetas. Este saldo se encuentra desvirtuado, principalmente, por la incorrecta anulación de derechos reconocidos por subvenciones de capital con cargo al mismo por un importe de 4.718 millones de pesetas en la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar y por la no inclusión de 1.757 millones de pesetas en el Instituto de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a que se hizo referencia en el punto 15 anterior (apartado I.3.3.1.B).

20.- La regularización de las partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o incorrectamente aplicadas hasta 31/12/90, -a las más importantes de ellas se ha hecho referencia en los puntos 15 y 19 anteriores-, supondrá una disminución de los resultados acumulados de los Organismos autónomos administrativos de 579.302 millones de pesetas (apartado I.3.3.2).

EN RELACIÓN A LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS O ANÁLOGOS

21.- Las cuentas rendidas por numerosos Organismos presentan defectos formales, tales como falta de remisión de documentos preceptivos, incorrecciones y falta de uniformidad de alguna de las partes que componen el cuadro de financiamiento e insuficiente aclaración de las causas que motivan las modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores. Se singulariza, por la importancia de su desviación respecto a la Instrucción de contabilidad aplicable, el Organismo a que se ha hecho referencia en el punto 3 anterior -Confederación Hidrográfica del Norte de España-, cuya cuenta no debió haberse incluido en los estados anuales agregados sin la corrección previa de las cuentas por el rendidas.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la fiscalización específica llevada a cabo por este Tribunal sobre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se considera que la cuenta rendida por el Organismo no representa la imagen fiel de su situación patrimonial a 31/12/90, ni de los resultados obtenidos por el mismo (apartado I.4).

22.- La cifra agregada de obligaciones reconocidas en cuentas -802.210 millones de pesetas- se encuentra desvirtuada, básicamente, por:

a) La contracción en el CSIC, como obligaciones reconocidas, de meros compromisos de gasto por importe, al menos, de 2.279 millones de pesetas.

b) La falta de aplicación de criterios uniformes en la distinción entre operaciones comerciales y presupuestarias por parte de los Organismos, debido a la indefinición normativa existente en esta materia, que ha dado lugar a tratamientos contables diferentes de un mismo tipo de operaciones y ha hecho posible la incorrecta elusión de las limitaciones propias de los créditos presupuestarios, tratando como operaciones comerciales gastos e incluso inversiones de naturaleza presupuestaria, que ascienden, al menos a 8.224 millones de pesetas, de los que 4.954 corresponden al CSIC, 2.952 al Servicio Militar de Construcciones, y 318 al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).

Por otra parte, los derechos contraídos en el ejercicio -526.068 millones de pesetas- comprenden 532 millones de pesetas correspondientes a créditos de transferencias del Estado anulados por éste y registrados en cuentas como derechos pendientes de cobro por el Instituto de la Juventud, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta del Puerto de Ceuta (apartados I.4.1.1 y I.4.1.2).

23.- En relación a los balances de situación a 31/12/90 de estos Organismos, cuyo importe agregado -excluidas cuentas de orden y control presupuestario- asciende a 3.226.904 millones de pesetas, son destacables las siguientes observaciones:

a) Las Juntas de Puerto y la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos revalorizan anualmente su inmovilizado según los índices de precios al consumo, de acuerdo con una norma emanada de la Dirección General de Puertos que no es acorde con los criterios de valoración establecidos por el Plan General de Contabilidad Pública (apartado I.4.2.1.A.1.a).

b) No practican amortizaciones de su inmovilizado material 17 de los 53 Organismos incluidos en los estados agregados, representando el valor de los activos no amortizados aproximadamente el 40% del total. Asimismo incurren en idéntico defecto respecto al inmovilizado inmaterial, 3 de los 12 Organismos en los que ha tenido movimiento esta cuenta (apartados I.4.2.1.A.1.e) y I.4.2.1.A.2).

c) De los 18.056 millones de pesetas a que asciende el saldo neto agregado de la cuenta "inmovilizado inmaterial", al menos 2.519 millones del Instituto Nacional de Promoción del Turismo de España (TURESPAÑA) y la mayor parte de los 3.306 millones del saldo que presenta el Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA) deben considerarse como activos ficticios por corresponder a gastos incorrectamente activados; por otra parte, el inmovilizado inmaterial del Instituto Tecnológico Geominero de España figura en cuentas con un valor de 10.464 millones de pesetas, sin que sea objeto de amortización alguna (apartado I.4.2.1.A.2).

d) El Consorcio de Compensación de Seguros incluye en "inmovilizado financiero" 305.459 millones de pesetas por préstamos a CESCE que derivan de operaciones relativas a la cobertura de riesgos políticos y extraordinarios, de los que, de acuerdo con la normativa vigente, el Organismo es un mero administrador por cuenta del Estado y, en consecuencia, no debieran haber sido incluidos en la cuenta referida.

Por la misma razón no se considera correcta la contabilización en "Deudas a medio y largo plazo" de los fondos recibidos del Estado para financiar las indicadas operaciones (apartados I.4.2.1.A.3 y I.4.2.2.C).

e) Una parte significativa de los 34.633 millones de pesetas que como saldo de la cuenta de deudores por operaciones comerciales aparece en la contabilidad del Organismo de Aeropuertos Nacionales (OAN), se considera de dudoso cobro, sin que se haya realizado la oportuna provisión. Tampoco dotan provisiones el Parque Móvil Ministerial y varias Confederaciones Hidrográficas a pesar de tener saldos elevados de deudores con un bajo índice de cobro (apartado I.4.2.1.C).

f) La utilización de diferentes criterios contables en el registro de las operaciones entre el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) y el Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA), tiene como consecuencia que en el balance del SENPA aparezcan en partidas pendientes de aplicación dos saldos, uno acreedor y otro deudor, por importes respectivos de 46.773 y 44.842 millones de pesetas, mientras que el FORPPA recoge en cuentas de relación con el SENPA, 3.438 millones en partidas pendientes de aplicación (saldo deudor), 2.806 millones como deudores por operaciones comerciales, 11.297 millones como acreedores comerciales y 18 millones como préstamos a corto plazo (apartado I.4.2.1.D.a).

g) Los beneficios acumulados de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) que aparecen recogidos en la cuenta "Resultados pendientes de aplicación" y ascienden a 11.231 millones de pesetas, son consecuencia de la incorrecta cuantificación de los derechos reconocidos del Organismo por aportaciones estatales, ya que se realiza en función de los planes de seguros previstos, cuya ejecución ha venido presentando desviaciones significativas a la baja; no obstante, en este ejercicio se financia parte del Plan con fondo de maniobra y no con subvenciones del Estado, produciéndose una pérdida por operaciones corrientes de 7.471 millones de pesetas (apartados I.4.2.1.E y I.4.3.1.A).

24.- Los resultados agregados del subsector aquí considerado arrojan un saldo acreedor de 76.719 millones de pesetas, sobre cuya exactitud inciden negativamente no sólo la falta de dotación de las oportunas amortizaciones y provisiones señalada anteriormente, sino también los defectos contables que se indican a continuación y que afectan unas veces a su cuantía y otras a su composición:

a) ENESA presenta en el ejercicio una pérdida por operaciones corrientes de 7.471 millones de pesetas, que no es representativa de la gestión realizada sino que deriva del defectuoso cálculo de los derechos y obligaciones (apartados I.4.2.1.B y I.4.3.1.A).

b) El ONLAE no recoge en su cuenta de resultados 19.000 millones de pesetas correspondientes a una transferencia realizada al Estado en el ejercicio, al cargarlos directamente a sus cuentas de patrimonio y reservas (apartado I.4.3.1.A.d).

c) El Servicio Militar de Construcciones y el INTA califican incorrectamente como compras, en su cuenta de resultados corrientes, diversos gastos por naturaleza que ascienden a 2.952 y 318 millones de pesetas respectivamente (apartado I.4.3.1.A.e).

d) Las aportaciones de las Juntas de Puertos a la Seguridad Social, derivadas de la integración en ella del Montepío de Previsión Social para empleados y obreros de puertos, no se han contabilizado uniformemente, toda vez que, para una aportación global de 1.593 millones de pesetas, sólo 339 millones, correspondientes a 3 de las 17 Juntas y a la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, se registraron en resultados extraordinarios como establece la norma dictada al efecto (apartado I.4.3.1.B.b).

25.- El fondo de maniobra existente al inicio del ejercicio no ha sido debidamente tratado como fuente de financiación, ya que, para un valor real agregado de 222.566 millones de pesetas, sólo se prevé la utilización inicial de 48.651 millones, si bien posteriormente se emplean como recurso para financiar modificaciones de crédito 10.971 millones.

La inadecuada presupuestación y utilización del fondo de maniobra origina situaciones de exceso o defecto de capital circulante, dificulta la instrumentación de una política coherente de transferencias entre el Estado y los Organismos, y en definitiva, perjudica la debida aplicación del principio de unidad de caja (apartado I.4.2.4).

Madrid, 21 de diciembre de 1993

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Adolfo Carretero Pérez

CONSEJERO DE CUENTAS

Miguel C. Álvarez Bonald

CONSEJERO DE CUENTAS

Miguel A. Arnedo Orbañanos

CONSEJERO DE CUENTAS

Eliseo Fernández Centeno

CONSEJERO DE CUENTAS

Milagros García Crespo

CONSEJERO DE CUENTAS

Paulino Martín Martín

CONSEJERO DE CUENTAS

Ramón Muñoz Álvarez

CONSEJERO DE CUENTAS

Ubaldo Nieto de Alba

CONSEJERO DE CUENTAS

Antonio de la Rosa Alemany

CONSEJERO DE CUENTAS

Juan Velarde Fuertes

FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Miguel Ibáñez García de Velasco

EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Ciriaco de Vicente Martín

EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Antonio del Cacho Frago

AL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

EL FISCAL, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley Orgánica 2/1982, en relación con el proyecto de Declaración Definitiva de la Cuenta General del Estado, correspondiente al Ejercicio 1990, dice:

Se desarrolla todo el Proyecto de Declaración sobre las bases legales correspondientes y como consecuencia del examen realizado a la cuenta presentada de la Administración General del Estado, los Organismos Autónomos de carácter Administrativo y los de carácter Comercial, Industrial,

Financiero o análogo, que es la materia correspondiente al Tomo I del Informe Anual y sirve de base a esta Declaración por lo que en atención a los diferentes entes que han sido fiscalizados, también la Declaración Definitiva se divide en tres partes: la correspondiente a la Cuenta de la Adminitración General del Estado, una segunda parte referida a los Organismos Autónomos Administrativos y una tercera relativa a los demás objeto de examen, precedido todo ello de un apartado común de consideraciones generales, que es de extraordinario interés. En los diversos capítulos, se observa que buen número de los defectos detectados y expuestos en cada uno de los apartados son similares a los que surgen en los demás, no obstante la diferente entidad del órgano examinado.

Como ya es tradicional, la primera cuestión que aparece al iniciar el estudio de la Cuenta General, es que subsiste el defecto clásico de incumplimiento del deber de rendir cuentas, de hacerlo en el plazo legalmente establecido o con la extensión y corrección marcadas en la Ley. A ese respecto, como si el año 1990 fuese el primero en que el Sector Público debe llevar y rendir las cuentas a los órganos de control externo del Estado, vemos que son numerosos los organismos que no se han incluido en los estados anuales agregados; que también son muchos aquéllos cuyas cuentas se han recibido tan fuera de plazo que habrán de ser examinadas al márgen de la Memoria del año y de esta Declaración Definitiva y que otros, a pesar de que sus cuentas han sido integradas en los estados anuales agregados, su defectuosidad resulta perturbadora para la debida corrección contable, pues si bien permiten detectar y exponer los defectos en que se ha incurrido, su aceptación significa considerar cumplido el deber de rendir las cuentas, cuando dentro de los organismos del Estado no cabe que este tipo de deberes se despachen defectuosamente o sin ajustarse estrictamente a la normativa aplicable.

La Declaración expone, con firmeza aun dentro de un estilo ponderado, estos defectos y su importancia, señalando los porcentajes que en el total de las respectivas contabilidades significan, pero la Fiscalía no puede por menos de enfatizar la gravedad de este modo de hacer que rompe, por falta o por defecto, la principal obligación de todo cuentadante, con conductas que el Sector público de un Estado de Derecho no puede aceptar pues su régimen económico requiere acreditamiento pleno y exacto, lo que además es exigencia cada día más extendida de la opinión pública, que mira con gran interés y especial recelo, todo lo relativo al manejo de sus fondos.

Independientemente de las medidas que esta Fiscalía ha solicitado dentro del ámbito de las actuaciones del propio Tribunal de Cuentas, no parece que hasta el momento por parte de la Administración se haya adoptado ninguna para evitar estas carencias, que son gravísimas, ni para corrección de los cuentadantes o de los equipos económicos y contables, ni para la sanción de los organismos incumplidores.

También, en buena línea de claridad y sistemática, el Proyecto expone con detalle las actuaciones impropias que surgen por falta de concordancia en las entidades pagadoras y perceptoras en materia de transferencias internas, circunstancia que es bien conocida y que hay que resaltar porque esas discrepancias son "numerosas" y algunas de alto monto económico, pero posiblemente menores que las de años anteriores, por lo que puede pensarse que la crítica vertida anteriormente provoque el saneamiento de estos defectos formales que, son muy llamativos y hacen imposibles los estados conciliados.

Mucha mayor gravedad, pues ya no se trata de fallos formales sino de aplicación "excesiva", de facultades de la Administración y vulneración, en su caso, de normas vigentes, tiene lo relativo a las diferentes figuras de las modificaciones de créditos que alcanzan su máxima transcendencia y gravedad en el ámbito de las ampliaciones.

Ciertamente no deben considerarse ilegales, pero en base a impropias posibilidades de actuación de la Administración puede quedar, de hecho en sus manos, la capacidad presupuestaria que corresponde a las Cortes. Este problema viene arrastrado desde hace años y debemos volver sobre él cuantas veces sea necesario, pues nada es más contrario a los principios democráticos que la alteración solapada de las facultades de los distintos Poderes del Estado.

La Declaración Definitiva expone y cuantifica las ampliaciones de créditos que por unas u otras razones no debían aprobarse, detallando las causas por las que se objeta su aprobación, haciéndose la misma advertencia que acabamos de exponer de que por este camino puede procederse a contraer obligaciones financieras, saltándose lo previsto en la propia Constitución. Es pues materia a meditar, muy grave.

Cuando se entra en la cuenta de la Administración General del Estado, nos encontramos con que en sucesivos epígrafes se puntualizan los fallos esenciales, señalando las cuantías y los efectos. Se destaca la inaplicación al Presupuesto de gastos de determinadas e importantes obligaciones originadas en el ejercicio lo que trae, además, como consecuencia que introducidas en la cuenta las partidas omitidas, resultaría vulnerado lo ordenado en el artículo 10

de la L.P.G.R., que se promulgó para limitar el gasto público, a pesar de que también se apreciaron errores al imputar al presupuesto obligaciones generadas en años anteriores o al no hacerlo con determinados derechos del ejercicio, y en todo caso, el superávit de gestión presupuestaria quedaría afectado, disminuyendo notablemente por las anomalías contables relativas a gastos e ingresos; también, al cierre de las cuentas continúan sin aplicar a Presupuesto numerosas obligaciones correspondientes a inversiones concretas y determinadas, que se señalan, y al mismo tiempo tampoco se han recogido gran número de derechos que igualmente se determinan, con lo que resulta que hay numerosas partidas que por no haberse tratado adecuadamente en el presupuesto correspondiente, no solo alteran éste en las partidas concretas y en los resultados, sino que trasladan sus efectos, generalmente obligaciones, a Presupuestos posteriores que ya de por sí habrán de grabar otros conceptos, igualmente desplazados, con lo que por un lado el cierre de las cuentas de 1990 no responde a la realidad y por otra parte se agrava cuantiosa e innecesariamente el presupuesto o los presupuestos posteriores. En aras de la necesaria transparencia, este sistema de actuar debería desaparecer en el tratamiento económico del Sector público, pues provoca unos resultados presupuestarios ficticios por más favorables que los verdaderos.

La variación en la cuenta de resultados se calcula en 1.421.702 millones de pesetas, sin incluir algunos conceptos que responden a otras exigencias.

Es curioso que este estilo de actuación que puede presentar una apariencia de resultados más atractiva, se practique también en algunos organismos autónomos como el INEM, FOGASA, ISFAS, INE, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa y el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, cuyos resultados agregados de no ser por estas prácticas, pasarían a ser negativos.

Todo el resto de la Declaración Definitiva constituye una clara exposición de las anomalías que se han cometido, algunas de ellas corregibles y que se refieren tanto a la cuenta de la Administración General como a las de los Organismos Autónomos que se analizan en sus resultados globales, pero exponiendo individualizadamente las incorrecciones cometidas, muchas de ellas importantes y en algunos casos de tal transcendencia que obligan a afirmar, como se ha hecho al exponer la comprobación del INE, que su cuenta no representa la imagen fiel de su situación patrimonial.

Todo el contenido de la Declaración, que es un documento clarificador, concreto y muy estimable, que expone correctamente los nemerosos defectos de la Cuenta General que deberían ser corregidos para responder a los principios de transparencia y exactitud que un Estado democrático de Derecho ha de exigir a sus cuentadantes en el manejo de los fondos públicos, considerada en su conjunto y valorados por un lado los tres elementos negativos a que en primer lugar nos hemos referido: cuentas incompletas, presupuestos ampliados excesivamente por la Administración y partidas de resultados engañosas, y por otro los fallos, de todo tipo, que después se exponen, nos llevan a considerar que la Cuenta General del Estado es, cuando menos, manifiestamaente mejorable.

Madrid, 16 de diciembre de 1993

EL FISCAL JEFE,